ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

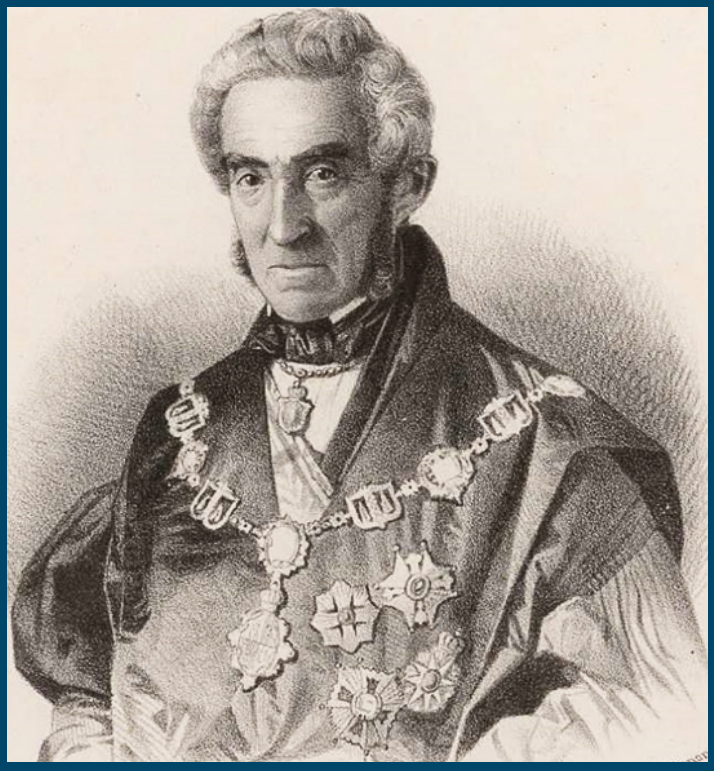
DE

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

O

Nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias

Lorenzo Arrazola



TOMO XII

Compraventa de bienes nacionales- Contabilidad mercantil

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

o

Nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias

Por Lorenzo Arrazola

Tomo XII

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Madrid, 2024

Primera edición: octubre de 2024.

En cubierta: *Grabado que muestra a Lorenzo Arrazola con el collar e insignias de presidente del Tribunal Supremo, c.1860.*

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para esta edición.

Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0



https://cpage.mpr.gob.es

NIPO AEBOE: 144-24-090-0 (edición en línea, PDF)
ISBN: 978-84-340-2972-9

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID

ÍNDICE

Tomo I

Prólogo
Abacerías-Adoración

Tomo II

Adquirir-Anata

Tomo III

Anatema-Arrendatario

Tomo IV

Arrepentimiento-Ausente

Tomo V

Austria (Casa de)-Benefactoría

Tomo VI

Beneficencia- Buzo

Tomo VII

Cábala-Casos

Tomo VIII

Casquete-Ciudades de voto en Cortes

Tomo IX

Ciudadela-Colegios singulares o especiales

Tomo X

Colegislador-Compeler

Tomo XI

Compensación-Compraventa mercantil

Tomo XII *

Compraventa de bienes nacionales-Contabilidad mercantil

Tomo XIII (inacabado)

Contador-Cosa litigiosa

* El tomo XII incluye el índice general de la Enciclopedia, en el que se relacionan todas las voces analizadas, y para cada una tomo y página.

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

DE

DERECHO Y ADMINISTRACION,

Ó

Nuevo Teatro Universal de la Legislacion

DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS,

POR

D. LORENZO ARRAZOLA,

D. PEDRO GOMEZ DE LA SERNA Y D. JOSÉ M. MANRESA Y NAVARRO.

COLABORADORES:

D. Cirilo Alvarez Martinez.
D. Fernando Alvarez.
D. Santiago Diego Madrazo.
D. Vicente Gomis y Serra.
D. Leon Galindo de Vera.
D. Manuel Perez de Molina.
D. Fernando Cos-Gayon.
D. José M. Fernandez de la Hoz.
D. Antonio Corzo y Granado.
D. Alejandro Groizard.
D. Pio de la Sota y Lastra.
D. José Magáz y Jaime.
D. Mariano Nougués y Secall.
D. José Maria Antequera.

Indocti discant, et ament meminisse periti.

Tomo XII.

MADRID:
IMPRENTA DE LA REVISTA DE LEGISLACION, Á CARGO DE J. MORALES,
Ronda de Atocha, número 15.

1870.

ADVERTENCIA. La propiedad de esta obra está garantida por la *ley de propiedad literaria*. Se tendrán por furtivos los ejemplares que no lleven el siguiente sello, y otras contraseñas que, para perseguir la usurpacion, reserva la Empresa.

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

DE

DERECHO Y ADMINISTRACION,

Ó

NUEVO TEATRO UNIVERSAL DE LA LEGISLACION

DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS.

C

COMPRA-VENTA DE BIENES NACIONALES. En su esencia es el mismo contrato de compra-venta del derecho comun; pero atendidas las condiciones de la cosa y la índole del vendedor, ha sido preciso rodearlo de diferentes formas y solemnidades, y aun tambien modificar algunos de sus efectos. A este fin se han dictado varias leyes y reglamentos, y otras muchas disposiciones de aplicacion concreta á estas ventas, que dan á las mismas un carácter especial y propio; y de aquí tambien la necesidad de tratarlas en artículo especial.

Y en rigor, no podia ser otra cosa. El derecho comun, por regla general, parte del supuesto de que vendedor y comprador tienen la libre administracion de sus bienes, y capacidad legal por tanto para contratar y obligarse. Cuando alguno de ellos carece de este requisito, no solo atiende la ley á suplir la falta de capacidad; sino tambien á dispensar la proteccion y amparo que aquel individuo necesita para no ser perjudicado en sus intereses, dictando al efecto las disposiciones especiales adecuadas á la índole del caso. Y si esto sucede respecto de los bienes de menores y demás personas incapacitadas, con mayor razon tenia que suceder al tratarse de la venta de los cuantiosos bienes de que se incautó el Estado en virtud de las leyes de desamortizacion, además de los que poseia anteriormente (1).

(1) Para que nuestros lectores puedan formar idea de la importancia de los bienes nacionales que se han puesto en venta en virtud de las leyes de desamortizacion, dictadas desde 1820 hasta el dia, creemos conveniente insertar aquí un resúmen de los bienes vendidos y de los que restan por vender, tomado de datos oficiales. Estos datos son los *estados* formados por la Direccion del ramo, que se publicaron en la *Gaceta de Madrid* en Marzo de 1857, divididos en dos períodos: el 1.° desde 1821 á 1823 y desde 1836 á 1851, en que se suspendieron las ventas de los bienes del clero para arreglar el concordato con la Santa Sede: y el 2.° desde la ley de 1.° de Mayo de 1855 hasta fines de 1856, en que se suspendió el cumplimiento de esta ley. El 3.er período, desde el Real decreto de 2 de Octubre de 1858, por el que se levantó en parte dicha suspension, hasta fin de 1867, está to-

La venta de estos bienes se hace á nombre del Estado, y como es indispensable encomendar su realizacion á empleados ó agentes subalternos, de aquí la necesidad, para la buena gestion, de determinar circunstanciadamente las funciones de cada uno de ellos; de

---

mado de los *estados* que se acompañan á una *memoria*, que el Director del ramo presentó al Ministro de Hacienda en 27 de Junio de 1868, sobre la gestion administrativa de su cargo.

PRIMER PERÍODO.—DESDE 1821 Á 1851.

	VALOR TOTAL. Rs. vn.	Cénts.
Valor de las fincas rústicas y urbanas, vendidas del clero regular.	3,141.666,873	»
Idem de id. del clero secular.	778.343,433	»
Idem de la redencion de censos y foros de ambos cleros.	635.319,921	»
Importe total de lo enajenado de ambos cleros.	4,555.330,227	»

SEGUNDO PERÍODO.—DESDE 1855 Á 1856.

Procedencia de los bienes.	Número de fincas de que se incautó el Estado.			Número de fincas vendidas.			Valor total en venta ó redencion	
	Rústicas.	Urbanas.	Censos y foros.	Rústicas.	Urbanas.	Censos y foros.	Rs. vn.	Cts.
Del Estado. . . .	1,915	904	4,352	228	147	638	15.815,177	»
Del clero regular.	10,441	2,270	77,600	2,494	629	15,468	80.596,951	»
Del clero secular.	112,464	16,907	162,430	22,351	4,676	46,946	354.912,492	»
De las Ordenes militares.	354	57	2,326	257	34	653	12.976,102	»
Del secuestro de D. Cárlos. . . .	1,662	210	966	1,217	45	68	45.654,931	»
De propios. . . .	48,140	10,797	90,618	9,475	1,634	16,491	192.940,545	»
De beneficencia. .	22,691	5,660	33,571	6,025	1,256	5,971	186.249,891	»
De instruccion pública.	7,415	1,223	7,177	1,359	337	1,972	52.261,023	»
TOTALES. . .	205,081	38,028	379,040	43,406	8,758	88,207	941.407,112	»
Quedaron sin enajenar.				161,675	29,270	290,833		
Igual á lo incautado.				205,081	38,028	379,040		

TERCER PERÍODO.—DESDE 1859 Á 1867.

Procedencia de los bienes.	Número de fincas vendidas.		Tipo para la subasta.		Precio por el que han sido rematadas.	
	Rústicas.	Urbanas.	Rs. vn.	Cts.	Rs. vn.	Cts.
Del Estado.	8,464	1,596	158.936,624	74	282.308,044	46
Del clero y demás bienes eclesiásticos.	100,204	9,429	582.164,374	16	1,272.671,855	39
Del secuestro del ex-infante D. Cárlos.	318	124	39.127,428	17	56.800,347	»
De propios.	65,430	10,754	1,092.329,103	21	2,028.673,654	63
De beneficencia.	18,995	4,815	278.245,290	26	468.439,667	15
De instruccion pública superior. . .	294	28	5.079,430	84	11.244,567	50
De instruccion pública inferior. . . .	4,548	696	48.813,207	45	92.712,864	35
TOTALES GENERALES. . . .	198,253	27,442	2,204.695,458	83	4,212.851,000	48

En el *estado*, de donde se ha tomado el anterior resúmen, no se hace mencion de los censos y foros. De otro resulta que desde 1.° de Julio de 1866 á fin de 1867, se vendieron 256 censos, que fueron rematados en 1.078,876 rs., y fueron redimidos 51,754, capitalizados en 49.256,385 reales 85 céntimos: total en rs. vn. 50.335,261,85, valor de 52,010 censos vendidos y redimidos en 18 meses.

De otro *estado* resulta que, segun las cuentas rendidas por las administraciones de provincia, en 31

hacer la clasificacion de los bienes que han de sacarse á la venta, esceptuando aquellos cuya conservacion interese al mismo Estado ó á los pueblos, para atenciones del servicio público; de reglamentar las tasaciones y subastas para evitar fraudes y obtener las mayores ventajas posibles; de atender á la aprobacion de los remates, otorgamiento de escritura, posesion del comprador y pago del precio en la forma y plazos estipulados, con todo lo demás conducente á la consumacion del contrato; y de fijar, en fin, las consecuencias del mismo, determinando los casos de nulidad y todas las demás incidencias de estas ventas. Sobre todos estos puntos se dan reglas en las leyes y disposiciones que se insertan en la *parte legislativa*, y ellos son tambien el objeto del presente artículo. Lo que no esté espresamente determinado en dichas disposiciones, se regirá por el derecho comun.

Sobre la cuestion de método debemos tambien dar algunas esplicaciones. El objeto y fin principal de la venta de bienes nacionales es la desamortizacion de la propiedad inmueble; así es que se llaman *de desamortizacion* las leyes y reglamentos dictados para la realizacion de las ventas. A la vez contienen reglas para la administracion y contabilidad, para la capitalizacion y redencion de los censos, y sobre la inversion que ha de darse al precio de los bienes enajenados. El método de LA ENCICLOPEDIA exige que de estos particulares se trate en sus artículos respectivos, limitando el presente á todo lo que se refiera al *vendedor*, *comprador*, *cosa y precio*, é incidencias de estas ventas. Y á los propios estremos limitarémos la *parte legislativa*.

Además, como son tantas las disposiciones que se han dictado sobre esta materia, y tan diversa tambien la procedencia de los bienes que han venido á formar la masa de bienes nacionales sacados á la venta, para facilitar su consulta, las dividirémos en grupos ó secciones, segun puede verse en el *sumario*, siguiendo el órden cronológico dentro de cada grupo. Con el propio objeto, y para reducir en lo posible la estension de este artículo, sin omitir lo que consideramos de utilidad, no se insertan las disposiciones que ya no pueden tener aplicacion en el dia, en cuyo caso se hallan, entre otras, las de 17 de Agosto y 1.° de Octubre de 1820, que decretaron la desamortizacion y venta de los bienes del clero regular y de los jesuitas.

Debemos indicar, por último, que en el lenguaje comun y en el oficial, la enunciativa *venta de bienes nacionales* es la empleada generalmente, y así se dice, *junta de ventas*, *comisionado de ventas*, *incidencias de ventas*, et., por cierto con propiedad y lógica, puesto que es con relacion al Estado, que es el vendedor, y sus dependencias. Sin embargo, tratamos esta materia bajo la doble enunciativa de *compra-venta*, porque, habiendo de esponer tambien los derechos y obligaciones del comprador, concurren las mismas razones que han aconsejado emplearla en los dos artículos precedentes.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

SEC. I. *Leyes y disposiciones de aplicacion general, y relativas á los bienes del Estado y de corporaciones civiles.*

SEC. II. *Id. sobre bienes del clero secular y regular, de las Ordenes militares*

---

de Diciembre de 1867 *quedaban sin vender* 97,568 fincas rústicas y urbanas, valoradas en 466.986,075 reales 12 cénts.; y 334,005 censos y foros, que represntaban un capital de 692.081,770 reales 57 céntimos: valor total en rs. vn. 1,159.067,845,69.

En la propia *memoria* se dice que estas cifras no son exajeradas, antes bien es de esperar se aumenten, porque resulten mas bienes de los espresados, y por el beneficio ó aumento de valor que se obtiene en las subastas. Este beneficio en el 2.° periodo escedió, en conjunto, del 100 por 100, y en el 3.° ha subido á 91,09 por 100.

En estos datos no se han comprendido las minas, salinas, y fábricas del Estado, los montes y demás bienes que entonces estaban esceptuados de la venta, ni los del patrimonio de la Corona, cuyo valor es tambien de grande importancia.

Resulta, pues, de los datos oficiales anteriormente consignados, que los bienes nacionales enajenados hasta fin de 1867, importaron 9,759.923,600 rs., y que el valor de los que entonces quedaban por vender estaba calculado en 1,159.067,845 rs, á los que hay que agregar los del patrimonio de la Corona, salinas y minas, sacadas despues á la venta. Dejamos á la consideracion de nuestros lectores las reflexiones á que se prestan estos guarismos: no es de este lugar el entrar en ellas.

res, cofradías, obras pías y santuarios.
SEC. III. *Id. sobre montes públicos.*
SEC. IV. *Id. sobre las fábricas de salitre, azufre y pólvora.*
SEC. V. *Id. sobre las salinas del Estado.*
SEC. VI. *Id. sobre pequeños terrenos ó parcelas.*
SEC. VII. *Id. sobre los bienes del patrimonio de la Corona.*
SEC. VIII. *Legislacion de Indias: disposiciones sobre la venta de bienes de las órdenes religiosas suprimidas en la isla de Cuba.*

SECCION I.

Leyes y disposiciones de aplicacion general, y relativas á los bienes del Estado y de corporaciones civiles.

REAL DECRETO DE 19 DE FEBRERO DE 1836.

«Artículo 1.° Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raices de cualquiera clase, que hubiesen pertenecido á las comunidades y corporaciones religiosas estinguidas, y los demás que han sido adjudicados á la Nacion por cualquier título ó motivo, y tambien todos los que en adelante lo fueren, desde el acto de su adjudicacion.»

Por el artículo segundo se esceptúan de esta medida, los edificios que el gobierno destine para servicios públicos; y por el tercero y siguientes se dán reglas para el justiprecio, division y subasta de las fincas.

«Art. 10. El pago del precio del remate se hará en uno de estos dos modos; ó en títulos de la Deuda consolidada, ó en dinero efectivo.»

Por el art. 11.° se determinó el modo de ejecutar el pago en títulos de la Deuda consolidada y la parte proporcional que habia de entregarse de cada una de las diferentes clases de la misma.

«Art. 12. En el acto de hacerse la adjudicacion de las fincas rematadas en el mejor postor, optará éste, en cuanto al pago, por uno de los dos medios señalados en el art. 10. Esta opcion no admite reforma, porque es irrevocable.

Art. 13. Todos los compradores, ya sean á pagar en títulos de la Deuda consolidada ó en dinero efectivo, satisfarán la 5.ª parte del precio del remate antes de que se otorgue la escritura que les trasmita la propiedad.

Art. 14. Las otras cuatro quintas partes se pagarán, á saber: los compradores á títulos de la Deuda consolidada, otorgando obligaciones de satisfacer en cada uno de los ocho años siguientes la octava parte de dichas cuatro quintas, ó sea un 10 por 100 del importe total del remate. Y los compradores á dinero las otorgarán de satisfacer en cada uno de los 16 años siguientes una décima sesta parte de las mismas cuatro quintas, ó sea un 5 por 100 del importe total del remate. Estos plazos comenzarán á correr desde la fecha del otorgamiento de la escritura de venta.

Art. 17. Los herederos de los compradores de fincas se subrogan á las personas heredadas para el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes por pago de plazos, hasta consumar el del importe total del precio en que fueron rematadas las fincas.

Art. 18. Las fincas quedarán hipotecadas al pago de las obligaciones que debe otorgar el comprador. Esta circunstancia se hará constar en la escritura de venta que trasmita la propiedad.»

En el art. 19 se dispone que cuando algun plazo no fuese satisfacho á su vencimiento, se proceda á nueva subasta de la finca si el deudor no tuviese otros bienes de mas pronta disposicion, siendo todos los gastos de cuenta del mismo deudor.

Los restantes artículos se refieren á la amortizacion de la Deuda, en que debia invertirse el precio de estas ventas.

INSTRUCCION DE 1.° DE MARZO DE 1836.

Contiene las reglas é instrucciones para llevar á efecto la venta de los bienes nacionales en cumplimiento del Real decreto que precede. Dichas reglas han sido reformadas ó refundidas en la legislacion hoy vigente, que se insertará despues. Las que en algun caso podrán ser de interés en el dia son las que siguen:

«Art. 33. Las subastas se verificarán bajo las condiciones siguientes:

1.ª Que todas las cargas, á que estén afectas las fincas, serán de cuenta del comprador, espresándose las que sean.

2.ª Que las fincas que así se vendan, jamás se podrán vincular, ni pasar en ningun tiempo por ningun título á manos muertas.

3.ª Que la cantidad en que se rematen se ha de pagar indispensablemente en el modo y con los créditos que previene el Real decreto.

Art. 50. En la copia que de la escritura se diere al comprador, deberá ponerse la toma de razon por la contaduría de arbitrios de amortizacion de la provincia, y además deberá presentarse en el oficio de hipotecas en los términos y tiempo que está mandado.

Art. 53. Tampoco tendrá lugar en estas ventas recurso alguno de tanteo, retracto ú otra preferencia, ni contra ellas se admitirán demandas de lesion, ú otras dirigidas á invalidarlas, ni se adeudará laudemios ni veintenas.

Art. 54. En los juicios de reivindicacion, eviccion y saneamiento, estará sugeta la Real Hacienda á las reglas prevenidas por el derecho,

así como á la indemnizacion de las cargas de la finca al tiempo de venderse, que no estuvieren espresadas en la escritura.»

REAL ÓRDEN DE 10 DE ABRIL DE 1836.

Se declara, entre otras cosas, que en las cargas espresadas en la condicion primera del art. 33 de la Real instruccion de 1.° de Marzo del mismo año, se comprenden los censos de toda especie, sin que el acto de la venta de los bienes nacionales pueda perjudicar nunca los derechos de los respectivos censualistas; y que las ventas de las fincas rústicas y urbanas que se hallaren dadas en enfitéusis y foros, no han podido ni pueden verificarse sino en el dominio directo, y nunca en el útil, que continuará disfrutando el enfitéuta en los términos estipulados en el contrato correspondiente.

LEY DE 25 DE ENERO DE 1837.

«Art. 1.° Todos los bienes nacionales comprados en virtud de la ley y reglamentos hechos en las Córtes del año 1820 á 1823, se devuelven á los respectivos compradores, siempre que las compras fuesen hechas con arreglo á aquellas disposiciones, y los compradores hubiesen obtenido carta de pago, ó no habiendo podido verificar éste, lo realicen inmediatamente, si quieren usar de este derecho.

Art. 2.° Los compradores de bienes nacionales á que se refiere el artículo precedente, hacen suyos los frutos de dichos bienes desde la fecha del presente decreto. Si hubiese algun arrendamiento de estos bienes, cuyo precio tal vez estuviese anticipado por el arrendatario, se hará entre éste y el dueño de la finca el correspondiente prorateo, tanto de los frutos en su caso, como del precio del arrendamiento.»

LEY DE 28 DE JULIO DE 1837.

Se confirman y aprueban por las Córtes los Reales decretos espedidos para la venta de bienes nacionales.

REAL ÓRDEN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1843.

Se previene á las justicias de los pueblos no permitan la demolicion de ningun edificio vendido por la nacion, sin que los compradores acrediten tener satisfecha la totalidad del precio del remate, ó asegurado el pago de los plazos que resten, á satisfaccion de los administradores.

REAL ÓRDEN DE 14 DE JUNIO DE 1848.

Declara, entre otras cosas, que es contencioso-administrativo todo lo relativo á la validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, á la interpretacion de sus cláusulas, á la designacion de la cosa enajenada, declaracion de la persona á quien se vendió, y ejecucion del contrato.

REAL ÓRDEN DE 25 DE ENERO DE 1849.

Por el Ministerio de la Gobernacion se reproduce la que precede de 14 de Junio de 1848, espedida por el de Hacienda, declarando de la competencia de los consejos provinciales, y del Real en su caso, lo que en ella se espresa relativo á las ventas de bienes nacionales.

LEY DE CONTABILIDAD DE 20 DE FEBRERO DE 1850.

Art. 10. Declara que corresponde al órden administrativo la venta de bienes nacionales. (*Véase en la pág. 70 del tomo XI.*)

REAL ÓRDEN DE 7 DE MARZO DE 1850.

Se previene que para la cobranza de los débitos procedentes de fincas del Estado enajenadas, se observe lo prescrito en el Real decreto de 23 de Mayo de 1845 respecto á los débitos que procedan de contribuciones.

REAL ÓRDEN DE 20 DE SETIEMBRE DE 1852.

Art. 1.° Determina las cuestiones, relativas á bienes nacionales, que son de la competencia de los tribunales contencioso-administrativos, y las que corresponden á los juzgados y tribunales de justicia. (*Véase en la pág. 71 del tomo XI.*)

LEY DE 1.° DE MAYO DE 1855.

TÍTULO PRIMERO.—*Bienes declarados en estado de venta, y condiciones generales de su enajenacion.*

«Artículo 1.° Se declaran en estado de venta, con arreglo á las prescripciones de la presente ley (1), y sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos, todos los prédios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes

Al Estado.

Al clero.

A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, y San Juan de Jerusalen.

A cofradías, obras pías y santuarios.

Al secuestro del ex-infante D. Cárlos.

A los propios y comunes de los pueblos.

A la beneficencia.

(1) Véase la de 11 de Julio de 1856, que ha modificado la presente.

A la instruccion pública.

Y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender por leyes anteriores.

Art. 2.° Esceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

Primero. Los edificios y fincas destinados, ó que el Gobierno destinare, al servicio público.

Segundo. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia é instruccion.

Tercero. El palacio ó morada de cada uno de los MM. RR. arzobispos y RR. obispos; y las rectorías ó casas destinadas para habitacion de los curas párrocos, con los huertos ó jardines á ellas anejos.

Cuarto. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías.

Quinto. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas á la instruccion pública, durante la vida de sus actuales poseedores (1).

Sesto. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno (2).

Sétimo. Las minas de Almaden.

Octavo. Las salinas (3).

Noveno. Los terrenos que son hoy de aprovechamiento comun, prévia declaracion de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputacion provincial respectivos.

Cuando el Gobierno no se conformare con el parecer en que estuvieron de acuerdo el ayuntamiento y la diputacion provincial, oirá préviamente al Tribunal contencioso-administrativo, ó al cuerpo que hiciere sus veces, antes de dictar su resolucion.

Décimo. Y por último, cualquier edificio ó finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno por razones graves.

Art. 3.° Se procederá á la enajenacion de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando á pública licitacion las fincas ó sus suertes á medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamacion, segun lo disponga el Gobierno; verificándose las ventas con la mayor division posible de las fincas, siempre que no perjudique á su valor.

Art. 4.° Cuando el valor en tasacion de la finca ó suerte que se venda no esceda de 10,000 reales vellon, su licitacion tendrá lugar en dos subastas simultáneas, á saber:

Una en la cabeza del partido judicial donde la finca radique.

Y otra en la capital de su respectiva provincia.

(1) Véase la ley de 15 de Junio de 1856.

(2) V. en la sec. III de esta parte leg. la ley de 24 de Mayo de 1863, el reglam. de 17 de Mayo de 1865, y el art. 12 de la ley de presupuestos de 29 de Mayo de 1868.

(3) V. la ley de 16 de Junio de 1869 en la seccion V.

Art. 5.° Cuando el valor en tasacion de la finca ó suerte que se venda esceda de 10,000 reales vellon, además de las dos subastas que previene el artículo anterior, tendrá lugar otra tercera, tambien simultánea con aquellas, en la capital de la Monarquía.

Art. 6.° Los compradores de las fincas ó suertes quedan obligados al pago en metálico de la suma en que se les adjudiquen en la forma siguiente:

Primero. Al contado el 10 por 100.

Segundo. En cada uno de los dos primeros años siguientes, el 8 por 100.

Tercero. En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100.

Cuarto. Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100.

De forma que el pago se complete en 15 plazos y 14 años.

Los compradores podrán anticipar el pago de uno ó mas plazos, en cuyo caso se les abonará el interés máximo de 5 por 100 al año, correspondiente á cada anticipo (1).

TÍTULO SEGUNDO.—*Redencion y venta de los censos* (2).

Art. 7.° Para redimir los censos declarados en venta por la presente ley, se concede á los censatarios el plazo de seis meses, á contar desde su publicacion, bajo las bases siguientes:

Primera. Los censos cuyos réditos no escedan de 60 rs. ánuos se redimirán al contado, capitalizándolos al 10 por 100.

Segunda. Los censos cuyos réditos escedan de 60 rs. ánuos se redimirán al contado, capitalizándolos al 8 por 100; y en el término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizados al 5.

Tercera. Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por el precio medio que haya tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio.

Cuarta. Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo cánon ó interés esceda del 5 por 100, se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la imposicion ó fundacion, y si no estuviese reconocido al consignado en las bases primera y segunda.

Art. 8.° Concluido el término señalado para la redencion se procederá á la venta de los censos en pública subasta bajo los mismos tipos y condiciones establecidas en el artículo anterior.

Art. 9.° El Gobierno asegurará á cada establecimiento de beneficencia las rentas que disfruta en

(1) Véanse los arts. 13 y 19 de la ley y 17 de la inst. de 11 de Julio de 1866, y las Reales órdenes de 23 de Julio de 1860 y 10 de Set. de 1863.

(2) Véanse las leyes de 27 de Febrero de 1856, 11 de Marzo de 1859 y 15 de Junio de 1866.

la actualidad, compensando la pérdida que pueda sufrir en la redencion ó venta de los censos con el aumento que se obtenga en la de los bienes inmuebles.

Cuando no posea el establecimiento de beneficencia bienes inmuebles, ó no se obtengan aumentos en la enajenacion de estos, el Gobierno cubrirá el déficit con los fondos del Tesoro público.

Art. 10. El pago del laudemio en los enfitéusis será á cargo de los compradores.

TÍTULO QUINTO.—*Disposiciones generales.*

Art. 24. Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los bienes enajenados en virtud de la presente ley, durante los cinco años siguientes al dia de su adjudicacion (1).

Art. 26. Los bienes donados y legados, ó que se donen y leguen en lo sucesivo á manos muertas, y que estas pudieren aceptar con arreglo á las leyes, serán puestos en venta ó redencion, segun dispone la presente, tan luego como sean declarados propios de cualquiera de las corporaciones comprendidas en el art. 1.°

Art. 27. El producto de la venta de los bienes de que trata el artículo anterior se invertirá segun su procedencia y en la forma prescrita.

Art. 28. Un año despues de publicada esta ley caducarán los arrendamientos pendientes, sin perjuicio de las indemnizaciones á que puedan tener derecho las partes contratantes (2).

Art. 29. Se declaran derogadas, sin fuerza y valor todas las leyes, decretos, Reales órdenes anteriores sobre amortizacion ó desamortizacion que en cualquier forma contradigan el tenor de la presente ley.

Art. 30. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, oido el Tribunal contencioso-administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije las reglas de tasacion y capitalizacion, y disponga los reglamentos y demás que sea conducente á la investigacion de los bienes vendibles, y á facilitar la ejecucion y cumplimiento de la presente ley.»

REAL DECRETO DE 15 DE MAYO DE 1855.

«Artículo 1.° Se crea una Direccion general de ventas de bienes nacionales, á que se unirán todas las resultas de la de fincas, que se estinguió y pasaron á la de rentas estancadas.

Art. 2.° La nueva Direccion será la autoridad superior de estos ramos; y en cuanto á ventas, se creará una junta que, con arreglo á la instruccion que se forme, resolverá, bajo la presidencia del director, los asuntos concernientes á la enajenacion y sus incidencias....»

INSTRUCCION DE 31 DE MAYO DE 1855, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 1.° DEL MISMO MES.

TÍTULO I.—*De la Direccion general.*

«Artículo 1.° El Director general ejercerá, bajo las inmediatas órdenes del Ministerio de Hacienda, la autoridad superior gubernativa en todos los negocios de administracion, investigacion y venta de los bienes, censos, foros y demás propiedades del clero, cofradías, memorias, obras pías, ermitas y santuarios; de los del instituto de las escuelas pías no designados en el artículo 2.° de la ley; de los de las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalen; de los que posee el Estado no esceptuados por el referido artículo, y de los del secuestro del ex-infante D. Cárlos, así como de la investigacion y venta de los propios y comunes de los pueblos, de los de beneficencia, instruccion pública y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender por leyes anteriores.

Art. 14. Cuando resultare insolvente cualquier deudor por ventas de los bienes de que se incauta el Estado, dispondrá el Director que la accion se dirija contra quien legalmente deba responder, oyendo de antemano al asesor general de Hacienda.

Art. 22. Es de las atribuciones de la Direccion acordar, á instancia de los interesados, que éstos hagan los pagos de lo que adeudan en una provincia, en la tesorería de Madrid ó en cualquiera otra del reino (1).

TÍTULO II.—*De los gobernadores.*

Art. 23. Los gobernadores civiles son la autoridad superior gubernativa en las provincias, en lo relativo á la administracion, investigacion y venta de los bienes comprendidos en la ley de 1.° del actual.

Art. 27. A propuesta de los comisionados, dispondrán los remates de las fincas cuyos espedientes estén terminados.

TÍTULO III.—*De los comisionados principales.*

Art. 31. Los comisionados, por tal concepto, son los encargados principales de la administracion de los bienes del clero y demás de que trata el artículo 1.° de esta instruccion, así como de la investigacion y venta de todos los comprendidos,

(1) Véanse las Reales órdenes de 30 de Julio y 16 de Octubre de 1856, y 20 de Abril de 1866.
(2) Véase la ley de 20 de Abril de 1856.

(1) Véase la circular de la Direccion de 25 de Enero de 1867.

y no esceptuados en la ley de 1.° de este mes, con dependencia inmediata de la Direccion general de ventas de fincas, y de los gobernadores civiles.

TÍTULO VII.—*De la venta de fincas.*

Art. 93. Para llevar á efecto lo dispuesto en la ley de 1.° de Mayo, se formará en la Direccion general de ventas de fincas del Estado una junta denominada *Superior de Ventas*, compuesta del Director presidente, dos senadores, dos diputados, dos altos funcionarios pasivos, dos personas notables por su ciencia, arraigo y probidad, el asesor general de Hacienda, y un secretario, que lo será un subdirector del ramo.

Hasta que se haya constituido el Senado, en lugar de dos serán cuatro los diputados vocales.

Art. 94. La misma Direccion abrirá un registro general de todos los bienes, censos y derechos declarados en venta por dicha ley.....

Art. 95. Dispondrá la Direccion general, en union con la Junta, que por las contadurías de Hacienda pública y comisionados se formen... registros parciales, remitiéndose cada quince dias copias de las fincas, censos y demás que se vayan registrando, á fin de poder formar el general de que trata el artículo anterior.

Art. 96. Entenderá tambien la Junta de ventas:

1.° En los espedientes que se promuevan sobre las escepciones de que habla el art. 2.° de la citada ley.....

3.° En los de reclamacion de pago de las cargas ó créditos á que están afectos los bienes comprendidos en el art. 1.° de la espresada ley de 1.° de Mayo.

4.° En los espedientes que se promuevan sobre division de fincas, conveniencia ó inconveniencia de la enajenacion de cualquiera de ellas.

5.° En los espedientes de subasta adjudicando al mejor postor la finca ó fincas rematadas, ó en la suspension de dicho acto en los casos que hubiese fundado motivo para ello.

6.° En los sorteos que hayan de celebrarse cuando la postura más alta en los remates de una finca, así en la córte como en la capital y partido, fuese igual, á cuyo acto asistirá el juez y escribano que hubiesen entendido en la subasta.....

8.° En la resolucion de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas, censos ó sus redenciones, así como las que se hallen pendientes de las verificadas á consecuencia de los decretos de 1820 y 19 de Febrero de 1836.

9.° Y últimamente, resolverá ó consultará al Gobierno, dando su dictámen, cuantas dudas le ocurran, y las resoluciones que estén fuera de sus atribuciones.

Art. 97. Los acuerdos de la Junta superior serán comunicados por el Director (1).

Art. 98. A fin de que la Junta superior pueda resolver con el debido acierto y mayor ilustracion, se creará otra en cada provincia, compuesta del gobernador, de un diputado provincial, del contador de Hacienda pública, de un mayor contribuyente, un concejal nombrado por el ayuntamiento y del comisionado de ventas, que hará de secretario, ó por su ausencia y ocupacion, persona que le represente.

Art. 99. Esta junta entenderá en todos los asuntos encomendados á la superior, escepto en los á que se refiere el caso 5.° y 7.° del artículo 96, mediante á que estos son peculiares del gobernador y oficinas del ramo, siempre que no haya reclamacion.

Art. 100. Por consecuencia del artículo anterior, la junta instruirá los espedientes de que tratan los casos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 8.°, y con su dictámen los remitirá á la superior para su resolucion ó consulta al Gobierno. Esta remision se hará por los gobernadores á la Direccion del ramo.

Art. 101. Dispondrá tambien que por las oficinas del mismo se formen registros de todas las fincas, censos, foros y demás de que trata la ley de 1.° de este mes...; asi como tambien que cada quince dias se remitan á la superior notas de las que fueren registrando.

Art. 102. En la instruccion de los espedientes de subasta, redenciones de censos y su venta, entenderán los gobernadores, la contaduría de Hacienda pública, los comisionados del ramo, los jueces de primera instancia y los especiales de Hacienda, donde los haya, y los escribanos que se designen (2).

Art. 103. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde á dichos funcionarios lo siguiente:

A los gobernadores.—1.° Mandar publicar en el *Boletin oficial* listas de los bienes, censos y derechos de que se haya incautado el Estado, con espresion de su procedencia, pueblo donde radican, cabida y renta que producen.

2.° Remitir dos ejemplares del *Boletin* á la Junta superior, á fin de que por ésta se haga insertar en el *Boletin oficial general*.

3.° Nombrar los peritos, arquitectos y agrimensores que deben proceder á la tasacion y division de las fincas, prévia propuesta de los comisionados.

No será circunstancia precisa que los peritos sean aprobados por la Academia. Los maestros alarifes de práctica é inteligencia podrán ser

(1) Y causan estado si no se reclaman dentro de 60 dias: véanse las Reales órdenes de 13 de Julio y 20 de Agosto de 1856.

(2) Véanse las Reales órdenes de 8 de Julio y 4 de Octubre de 1855.

nombrados, aunque carezcan de aquel requisito (1).

4.° Recibir las peticiones de los que deseen adquirir bienes nacionales, y despues de informar las oficinas, disponer que se proceda á la tasacion y capitalizacion. Si por indicaciones confidenciales, ó de otro modo, tuviese motivo para creer útil la venta de una ó varias fincas aunque no se pidan, dispondrá que se tasen y capitalicen.

5.° Señalar dia y hora para la subasta, si no hubiere reclamacion sobre division, ó de cualquiera otra clase, en cuyo caso suspenderá el señalamiento y ordenará se forme el oportuno espediente, para que, dando conocimiento á la junta y emitiendo esta su dictámen, se eleve á la resolucion de la superior.

Para la instruccion del espediente, dictámen de la junta provincial y remision á la superior, solo mediará el tiempo de quince dias (2).

6.° Aprobar los actos de los espedientes de subasta, y por el primer correo remitir á la Junta superior los testimonios para que haga la adjudicacion al mejor postor y publique su nombre.

7.° Comunicar al juez del remate las órdenes de adjudicacion, á fin de que acuerde su cumplimiento.

8.° Disponer que las oficinas instruyan los espedientes de los censos, foros y demás cargas que, como pertenecientes á bienes nacionales, se pida su redencion.

9.° Reclamar de la diputacion provincial ó de los ayuntamientos de los pueblos de su respectiva provincia, certificaciones de los precios que hayan tenido en el decenio de 1845 á 1854 los granos, caldos y demás especies que se recolecten.

10. Hacer que por las oficinas del ramo, en vista de dichas certificaciones, se saque el término medio del precio que corresponda á cada especie, á fin de que el que resulte, bien sea en general, bien por localidades, sirva de tipo para las capitalizaciones de las fincas, censos, foros y demás cargas, cuyos rendimientos sean á pagar en dichas especies.

11. Disponer que el precio que resulte se publique en el *Boletin oficial*, remitiendo dos ejemplares á la Junta superior.

12. Cuidar de que, notificado que sea el comprador de habérsele adjudicado la finca, ó el censatario de haberse accedido á la redencion, se verifique el pago del primer plazo en el término que se marca, dando prévio aviso, y que los sucesivos los hagan con la oportunidad debida ó sea al vencimiento de los plazos con solo la concesion de quince dias (1).

13. Convocar á la junta provincial de ventas para celebrar las sesiones, que serán por lo menos dos cada semana.

14. Comunicar y hacer cumplir á las oficinas del ramo y demás que intervengan en la venta de bienes nacionales, las órdenes que se espidan por la superioridad.

15. Y por último, vigilar y cuidar de que se lleve á efecto cuanto por esta instruccion se previene.

A los contadores de Hacienda pública (2).—1.° Formar y tener siempre al corriente los registros de fincas, censos y demás pertenencias de la nacion, los cuales estarán... á disposicion de cuantos quisieren enterarse de ellos.

2.° Suministrar á los peritos tasadores, en union con el comisionado de ventas, cuantos datos y noticias puedan contribuir al mejor desempeño de su encargo.

3.° Practicar las capitalizaciones de las fincas, censos y demás que hayan de subastarse ó redimirse.

4.° Sacar el término medio, ó sea el precio del decenio de 1845 á 1854 de los granos, caldos y demás especies, á fin de formar las capitalizaciones de los bienes y censos cuyos rendimientos sean á pagar en dicha forma. Para esta operacion se tendrán presentes los testimonios de que trata este artículo y obligacion décima de los gobernadores.

5.° Hacer la liquidacion y rebaja de las cargas á que estén afectas las fincas que deban quedar por cuenta del comprador (3).

Se tendrá presente para este objeto que solo debe deducirse el importe de las cargas á favor de particulares, ó de aquellas que correspondan á los bienes que por la ley están esceptuados; mas no las que pertenezcan á los que por la misma se hallan declarados en venta, inclusa la de aposento, pues éstas han de enajenarse con la finca; pero se hará mencion de las que sean, y se practicará la liquidacion...

6.° Tomar razon en su registro del nombre del comprador, haciendo en los demás las anotaciones correspondientes.

7.° Custodiar y archivar el espediente promovido para la venta de la finca, censo ó redencion de éste, formando legajos por procedencias, fincas y censos.

8.° Evacuar cuantos informes se les exijan respecto á las fincas, censos y demás pertenecientes á la nacion, para lo cual se hará cargo de los títulos de propiedad, inventarios y papeles que se

(1) Véanse la Real órden de 20 de Mayo de 1836 y el decreto de 22 de Diciembre de 1868.
(2) Véanse la Real órden de 8 de Junio de 1859 y el Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

(1) Véanse las dispos. 9.ª y 10 de la Real órden de 25 de Enero de 1867.
(2) V. el reglam. de 8 de Dicbre. de 1869.
(3) V. las dispos. 8.ª, 11 y 12 de dicha R. O.

hallen en poder de los últimos poseedores, en cuanto sea posible.

9.° Intervendrá las cartas de pago que se espidan á los compradores, y las obligaciones que éstos presten.

A los comisionados.—1.° Tener registros de todos los bienes nacionales bajo los mismos modelos que los contadores, rubricándose los libros por los gobernadores y aquellos.

2.° Llevar otro de las fincas enajenadas...

3.° Proponer á los gobernadores los peritos, agrimensores y arquitectos que en nombre del Estado hayan de concurrir á la tasacion y division de las fincas, siendo cuando menos uno de aquellos en cada partido, y oficiar á los alcaldes en donde radiquen las propiedades para que el procurador síndico nombre otro, que en union con el del Estado proceda al cumplimiento de su comision.

4.° Formar é insertar en los *Boletines oficiales* listas de todas las fincas, censos, foros y demás cargas correspondientes al Estado.

5.° Activar la tasacion de todas las fincas que se hallen en estado de venta, removiendo por sí los obstáculos que se opusieren á ello, dando cuenta al gobernador y á la junta directamente, caso necesario, de los entorpecimientos que no esté en su mano remediar.

6.° Suministrar á los peritos, en union con la contaduría, cuantos datos y noticias puedan contribuir al mejor desempeño de su encargo.

7.° Disponer la insercion y publicacion en los *Boletines oficiales* y demás periódicos, de los anuncios relativos á las subastas y dias en que deban verificarse, cuidando de que trascurran los señalados por esta instruccion desde el en que se publique hasta el del remate; así como tambien remitir á la Junta superior con la debida anticipacion las relaciones de la doble ó triple subasta, que han de insertarse en el *Boletin oficial de ventas* de Madrid.

8.° Remitir á los jueces de la capital y de los partidos, que han de entender en las subastas, el *Boletin oficial* en que se publiquen las fincas para que dispongan se instruya el oportuno espediente y se celebre el remate.

9.° Oficiar al alcalde constitucional donde radique la finca para que disponga que en los sitios de costumbre se fije el correspondiente edicto en que se esprese la finca, procedencia, cabida, tasacion, sitio, dia y hora del remate, y ante qué autoridad se celebra, exigiendo aviso de haberse ejecutado la fijacion, cuyo documento se unirá al espediente de la capital (1).

10. Asistir á las subastas firmando éstas, y remitir á la Direccion, en el mismo dia en que se celebren, una nota de las fincas que se hubieren rematado..., con el V.° B.° del juez de la subasta (1).

11. Disponer que despues de concluidos los remates se estiendan por los escribanos los correspondientes testimonios, y que verificado esto, se remitan con los espedientes por su conducto al gobernador, para su aprobacion (2).

12. Procurar que aprobadas que sean las subastas se envien por el primer correo los testimonios á la Junta superior.

13. Instruir los espedientes de remates de fincas, redenciones de censos y de toda clase de reclamaciones, tomando y exigiendo de la contaduría de Hacienda pública cuantos datos é informes crean conducentes.

14. Conservar en su oficina los espedientes que se instruyan para la enajenacion de las fincas, redenciones ó ventas de censos, ínterin se concluyen y el comprador verifica el pago del primer plazo, en cuyo caso pasará el espediente á la contaduría para que lo archive.

Constará dicho espediente de la peticion de la finca, ó mandato; del informe que evacuen las oficinas; de la certificacion de los peritos tasadores; del *Boletin oficial* donde se publique la subasta; de la fecha de la órden de adjudicacion; del nombre á cuyo favor se hizo, y de la cantidad y fecha del primer plazo.

15. Corresponde tambien á los comisionados dar cuenta á los gobernadores de las fincas que, habiendo sido rematadas en una cantidad rigorosamente igual en ambas subastas, deba celebrarse sorteo, á fin de que se verifique éste prévia citacion á los individuos de la junta, juez y escribano que entendió en el acto.

A los jueces de primera instancia.—1.° Concurrir puntualmente á la celebracion de las subastas con asistencia del comisionado y escribano, y poner el V.° B.° en la nota que con arreglo á la obligacion décima de los comisionados deben remitir á la Direccion en el mismo dia en que se verifique el remate.

2.° Proceder á éstos, prévia citacion del procurador síndico, celebrándose un acto para cada finca, y determinar la duracion de cada uno de ellos.

3.° Cuidar de que el escribano actuario, durante la subasta, anote sucesivamente las posturas y los nombres de los licitadores.

4.° Concluir cada remate á favor del sugeto que haga la postura mas alta.

5.° Firmar el acta de la subasta con el comisionado, escribano y mejor postor, exigiendo á éste, si fuese por finca de mayor cuantía, la pre-

(1) V. la Real órden de 18 de Diebre. de 1838.

(1) Véase la circular de la Direccion de 23 de Junio de 1856.

(2) Véase la dispos. 3.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

sentacion del recibo del último trimestre de la contribucion que haya pagado, la cual será, cuando menos, al respecto de 500 rs. anuales. En defecto de la presentacion del recibo podrá admitirse fianza de persona de notoria responsabilidad á satisfaccion del mismo juez, del comisionado y del escribano. A los postores de fincas de menor cuantía se exigirá solamente esta última garantía (1).

6.° Disponer, concluida la subasta, que por el escribano se libre testimonio, el cual, en union con el espediente, se remita al gobernador por conducto del comisionado de ventas (2).

7.° Admitir las cesiones que los compradores hagan en el acto de firmar el remate, ó en los dos dias siguientes á la notificacion de haberle sido adjudicada la finca ó fincas (3).

8.° Devueltos que sean los espedientes con las órdenes de adjudicacion, y prévia la liquidacion de cargas que debe practicar la contaduría de Hacienda pública, dispondrá el juez se notifique á los compradores para que realicen el primer pago del precio de sus remates en el término de los quince dias siguientes, con apercibimiento de que pasados, y no haciéndolo, se procederá á nueva subasta á su costa, y con responsabilidad á pagar la diferencia que resultase entre el nuevo y anterior remate (4).

9.° Disponer que luego que le sea presentada la carta de pago se dé la posesion al comprador.

10. Otorgar ante el escribano que entendió en la subasta las correspondientes escrituras, haciendo que se estiendan en los impresos que el Gobierno determine (5), y que se tome razon en la contaduría de Hacienda pública y en la de hipotecas del partido á que corresponda la finca.

11. Concurrir con el escribano de la subasta al sorteo de las fincas que, por haber sido rematadas en ambos actos en una misma cantidad, exijan dicha circunstancia.

12. Estampar el V.° B.° en las notas que los escribanos deberán entregar al comprador, para que cuando verifique el pago del primer plazo lo haga tambien del importe del papel sellado que sea necesario para subrogar el de oficio y comun que se hubiese empleado hasta que se verifique la toma de posesion.

A los Escribanos. — 1.° Preparar los espedientes de subasta, sirviendo de cabeza el *Boletin oficial* donde se publique la venta de la finca ó fincas, y el oficio de remision que se acompañe.

2.° Citar al procurador síndico del ayuntamiento donde haya de celebrarse la subasta.

3.° Concurrir á los remates con el juez y comisionado, anotando sucesivamente las posturas y nombres de los sugetos que las hicieren.

4.° Librar testimonios á la conclusion de la subasta, y con remision de éstos y del espediente de la misma, pasarla al comisionado.

5.° Estender las diligencias de cesion que hicieren los rematantes en el acto de la subasta, ó á los dos dias de haberse notificado al comprador la adjudicacion de la finca ó fincas (1).

6.° Notificar la adjudicacion y liquidacion de cargas al comprador, á fin de que en el término de los quince dias siguientes á la notificacion, verifique el pago (2), para lo cual le entregará en el acto el correspondiente testimonio y nota de lo que deba satisfacer por el papel sellado para subrogar el de oficio y comun que se hubiese empleado, hasta que se verifique la toma de posesion.

7.° Estender las escrituras en los modelos impresos que la Junta de ventas disponga (3), no omitiendo se tome razon en la contaduría de Hacienda pública y en la de Hipotecas del partido á que corresponda.

A los peritos tasadores (4). — 1.° Entregada que sea al perito por el comisionado de ventas la órden para reconocer cualquier finca ó fincas, se constituirá personalmente en el punto donde radiquen, y procederá á su reconocimiento, medicion, clasificacion, division en su caso, y tasacion en venta y renta.

2.° Verificadas dichas operaciones, estenderá la correspondiente certificacion con el V.° B.° del alcalde del pueblo en que esté situada la finca, ó en su defecto del procurador síndico.

Art. 104. El acto de tasacion y division se ejecutará por dos peritos, haya ó no peticionario, que lo serán, uno el del partido, nombrado por el gobernador, y otro el que designe el procurador síndico donde radique la finca.

Si las fincas que se tasaren proceden de beneficencia ó instruccion pública, los representantes de estos establecimientos nombrarán en el término de tercero dia, contando desde el en que se les pase aviso, el que en union con el designado por el gobernador debe proceder á la mencionada

(1) Véanse el art. 27 de la ley de 11 de Julio de 1856 y la Real órden de 18 de Febrero de 1860.
(2) V. las disp. 1.ª y 2.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867.
(3) Véanse la circular de la Direccion de 26 de Julio de 1859, y las Reales órdenes de 18 de Febrero de 1860, 30 de Abril y 14 de Junio de 1864 y 2 de Enero de 1868.
(4) Véanse los artículos 28 y 29 de la ley de 11 de Julio de 1856, y la disposicion 6.ª y siguientes de la Real órden de 25 de Enero de 1867.
(5) V. las órdenes de Gracia y Justicia de 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869.

(1) V. las dispos. citadas en la nota 8.ª de la columna anterior.
(2) Véanse la circular de la Direccion de 7 de Diciembre de 1864 y las Reales órdenes citadas en la nota del art. 145.
(3) V. las órdenes de 17 de Febrero de 1866, 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869, y el art. 10 de los aranceles notar. de 1870.
(4) V. la Real órden de 30 de Marzo de 1867.

operacion. En el caso de no ejecutarse el nombramiento, lo verificará de oficio el juez de primera instancia.

Art. 105. En caso de discordia nombrará otro el gobernador.

Art. 106. Los peritos reconocerán la finca ó fincas, medirán su cabida (1), clasificarán los terrenos, manifestarán el estado de los edificios y plantíos, y tasarán en venta y renta, teniendo presente el producto anual, especialmente en los de alquiler ó arriendo, con deduccion de gastos, reparos, huecos, contingencias y administracion en las casas (2).

Art. 107. La tasacion se hará por su valor presente en dinero metálico y sin deduccion de carga, aunque la tenga.

Art. 108. Al tiempo que los espresados peritos hagan el reconocimiento y tasacion, verificarán la division de aquellas fincas susceptibles de ella, sin menoscabo de su valor, ni graves inconvenientes para su venta; declarando en caso contrario ser indivisibles (3).

Art. 109. Cuando los peritos manifiesten que una finca es divisible sin menoscabo de su valor, además de espresarlo así designarán tambien el que corresponda á cada una de las suertes en que hubiese sido dividida.

Art. 110. Los peritos, en la certificacion que espidan, además de espresar la cabida de la finca, su terreno, si es ó no susceptible de division, y su valor en venta y renta, manifestarán si tiene edificios, su estado, el número de cepas, olivos, frutales ú otros árboles de sombra ó fruto que hubiese en la tierra (4).

Art. 111. Se declararán divididas todas aquellas fincas que lo estén por su naturaleza, ó se hallen en diferentes términos ó pagos, aunque su cultivo corra á cargo de uno ó mas sugetos ó colonos, así como tambien las heredades ó fincas de grande estension que en el dia se cultiven en suertes ó pequeñas porciones (5).

Art. 112. La certificacion de tasacion y demás de que trata el art. 103, se entregará al comisionado de ventas por los peritos en el término de seis dias, firmada por los mismos, con el V.° B.° del alcalde donde radique la finca ó fincas, ó del procurador síndico, fijando al pié sus derechos (6).

(1) Véanse las Reales órdenes de 3 de Enero y 21 de Febrero de 1856.
(2) V. la Real órden de 10 de Abril de 1861, el Real decreto de 23 de Agosto de 1868, y la órden del Poder ejecutivo de 7 de Abril de 1869.
(3) Véanse las Reales órdenes de 22 de Julio de 1859 y 7 de Marzo de 1868.
(4) Véanse la Real órden de 10 de Abril de 1861 y la del Poder ejecutivo de 7 de Abril de 1869.
(5) Fué modificado este artículo por la Real órden de 1.° de Febrero de 1856, que se insertará mas adelante.
(6) Véase la Real órden de 20 de Mayo de 1856.

Art. 113. Al dia siguiente de recibida por el comisionado dicha certificacion la pasará á la contaduría de Hacienda pública para que en el término de sesto dia forme la capitalizacion (1).

Art. 114. Esta se verificará bajo la base de un 4 por 100 en las fincas urbanas, y el 5 por 100 en las rústicas, deduciendo un 10 por 100 del capital por razon de administracion y reparos (2).

Art. 115. Cuando la renta se pague en especie se reducirá á metálico, tomando por base el precio medio que haya tenido la misma en el último decenio, espresándose el que sea, la especie y cantidad que se pague.

Art. 116. Cuando á la finca ó fincas no se la conozca renta, bien por pagarse ésta en union con otras, bien porque no haya estado arrendada, la capitalizacion se girará por la renta dada por los peritos.

Art. 117. Verificada la capitalizacion, la misma contaduría en el término prefijado en el artículo 113, manifestará á continuacion si se halla ó no afecta á alguna carga ó censo, si está arrendada, por qué precio, y cuándo cumple el arriendo.

Art. 118. Si se hallase gravada, se espresará á favor de quién, clases de los censos ó cargas, capital y réditos, á cómo están impuestos éstos, si se hallan pagados, y el nombre ó corporacion que los perciba.

Art. 119. Para evacuar dicho informe se revisarán con toda escrupulosidad los títulos de propiedad, y si no existiesen éstos se exigirá del contador de hipotecas del partido donde radique la finca la correspondiente certificacion.

Art. 120. Este documento se espedirá en papel de oficio en el término de tercero dia, y con arreglo á lo que resulte de los libros ó registros de la contaduría.

Art. 121. Depurados dichos estremos, y el de que los antiguos poseedores no tenian título de propiedad, el comisionado de ventas dará cuenta al gobernador para que declare si es finca de mayor ó menor cuantía (3), y señale el dia y hora en que haya de celebrarse la subasta.

Art. 122. Hecha esta designacion, que será para los treinta dias de publicado el anuncio, el comisionado pasará el correspondiente al *Boletin oficial*, y remitirá á la Junta superior con la debida antelacion otro, para que, si la tasacion ó capitalizacion escediese de 10,000 rs., tenga lugar en esta córte la tercera subasta (4).

(1) Véanse la Real órden de 10 de Marzo y el Real decreto de 23 de Agosto de 1868.
(2) Modificado por el art. 7.° de la ley de 11 de Julio de 1856.
(3) V. el art. 6.° de dicha ley de 11 de Julio.
(4) V. dicho artículo, y la Real órden de 4 de Octubre de 1855 respecto á las islas Canarias.

Art. 123. Los mencionados anuncios han de espresar los nombres del juez y escribano que hayan de entender en la subasta; el dia, hora, sitio, corporacion ó persona á que pertenecieron la finca ó fincas; su clase, cabida, situacion, renta anual, cargas, precios de la tasacion y capitalizacion y época en que concluye el arriendo.

Art. 124. Además de dichos anuncios, respecto de las fincas que no llegan á 10,000 rs. (1) se fijarán edictos en el pueblo donde radiquen, exigiendo del alcalde constitucional el aviso de haberse hecho así, que se unirá al espediente de la capital (2).

Art. 125. Los anuncios de subasta se insertarán en el *Boletin oficial de ventas* de esta córte, con la anticipacion necesaria para que trascurran precisamente los treinta dias.

Art. 126. Con igual antelacion se publicarán los anuncios de las fincas cuyas subastas hayan de celebrarse en la cabeza del partido judicial donde radiquen, y en la capital de su respectiva provincia, sin perjuicio de fijar en la cabeza de partido los edictos correspondientes, lo cual se hará constar en el espediente que se instruya en el mismo punto.

Art. 127. Los comisionados de ventas remitirán á los jueces que hayan de entender en la subasta un ejemplar del *Boletin oficial* donde se inserte el anuncio de la finca ó fincas que han de rematarse, á fin de que por el escribano á quien corresponda se instruya el espediente, en el que pueden comprenderse diversas fincas, aunque cada una de ellas se haya tasado y deba rematarse por separado y en diferentes actos.

Art. 128. Cuando el valor de la finca ó fincas que se subasten esceda de 10,000 rs. (3), se celebrarán tres remates en el mismo dia y hora, uno en Madrid, otro en la capital de la provincia, y el tercero en la cabeza de partido donde radique la finca.

Art. 129. Respecto á las fincas situadas en el partido de la capital, solo se celebrará el remate en este punto, si fueran de menor cuantía; pero se hará constar en el espediente haberse fijado los edictos en el pueblo en que radiquen.

Art. 130. Las subastas se verificarán por turno entre los jueces de primera instancia y los especiales de Hacienda, donde los haya, con los escribanos que se designen.

Art. 131. A los treinta dias de anunciada la subasta deberá celebrarse ésta en las casas consistoriales, con asistencia del juez ó del que haga sus veces, del comisionado de ventas, del escribano á quien corresponda, y del procurador síndico, prévia citacion.

En las cabezas de partido asistirán los comisionados subalternos.

Art. 132. Las subastas se verificarán bajo las condiciones siguientes:

1.ª Que no han de hacer postura los que de cualquier modo intervengan en la venta, siendo nulo el remate que se celebre á su favor, sin perjuicio de la privacion de empleo al que lo hiciere (1).

2.ª Que no ha de admitirse postura á los que sean deudores á la Hacienda como segundos contribuyentes, ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus compromisos.

3.ª Que se han de admitir las posturas de todos los que se presenten á licitacion bajo la condicion de que tan luego como la voz pública dé por concluido el acto, se exijan al rematante las garantías mencionadas en la disposicion quinta para los jueces de primera instancia en el artículo 103 (2).

4.ª Anulada la postura por faltarse á la condicion anterior, se ha de tener por válida la inmediata, si el que la hubiese hecho se ratificara en ella; pero sin que por esto se dé por terminado el remate, pues que ha de continuar la licitacion para que sobre la postura ratificada se hagan cuantas se quieran, hasta que deje de haber quien mejore las hechas.

5.ª Que las cargas que graviten sobre las fincas á favor de particulares ó de los bienes esceptuados por el art. 2.º de la ley de 1.º de Mayo, han de quedar de cuenta del comprador, siempre que sean corrientes y conocidas, pues las que fueren á favor de las corporaciones, cuyas fincas están declaradas en venta, se enajenan con ellas, y queda su pago por cuenta del Estado.

6.ª Que las fincas así vendidas no han de poder jamás ser vinculadas ni pasar en ningun tiempo á manos muertas.

7.ª Que la cantidad en que se rematen ha de pagarse indispensablemente en la forma y tiempo que previene el art. 6.º de la ley de 1.º de Mayo (3).

8.ª Que será de cuenta del rematante ó persona á quien se adjudique la finca, el pago de todos los derechos del espediente, tasacion y demás hasta la toma de posesion.

Y 9.ª Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta, ya sea este el precio de la tasacion, ya el producto de la capitalizacion, ó ya la cantidad de la retasa.

Art. 133. Concluido cada remate, y firmado

(1) Hoy 20,000: dicha ley de 11 de Julio de 1856.
(2) V. la Real órden de 18 de Diciembre de 1855.
(3) V. el citado art. 6.º de dicha ley de 1856.

(1) V. la Real órden de 30 de Setbre. de 1852.
(2) Hoy en el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 y Real órden de 18 de Febrero de 1860.
(3) Y conforme á lo prevenido en los arts. 12 y 19 de la ley y 17 de la instruc. de 11 Julio de 1856.

por el juez, comisionado, y sujeto á cuyo favor hubiese quedado, se espedirá por el escribano el competente testimonio con arreglo al modelo número 6 (1).

Art. 134. Al siguiente dia de haberse verificado el remate, los escribanos de la capital y del partido que hubiesen entendido en él, prévio mandato del juez, pasarán el espediente de subasta y testimonio al comisionado de la capital, á fin de que, unidos que sean, dé cuenta al gobernador, y lo apruebe ó desapruebe, manifestando en este último caso los motivos, y dando cuenta á la junta.

Art. 135. En el caso de aprobacion, el gobernador remitirá por el primer correo á la Junta superior los testimonios para la aprobacion y adjudicacion de la finca en el mejor postor, si no hallase motivo para suspender ambos actos. El gobernador de Madrid enviará con el testimonio el espediente de triple subasta.

Art. 136. Verificada la adjudicacion, el Director del ramo comunicará al gobernador la correspondiente órden, que contendrá el nombre del mejor postor, la finca y cantidad en que lo hubiese sido.

Art. 137. Igualmente dispondrá que en el *Boletin oficial* se publique el nombre y vecindario de la persona, á quien la Junta haya adjudicado la finca ó fincas, y la cantidad que haya de pagar.

Art. 138. Si la postura mas alta en el remate de una finca, así en la córte como en la capital y en el partido, fuese de una cantidad rigorosamente igual, su adjudicacion será decidida por la suerte.

Este acto se celebrará á presencia de la Junta superior cuando se haya verificado el remate en Madrid, en la capital de la provincia y en el partido, con asistencia del juez y escribano que entendieron en la subasta de Madrid.

Art. 139. En los casos de esta naturaleza que ocurran en la doble subasta de fincas, cuyos remates se hayan celebrado solo en el partido y en la capital de la provincia, el sorteo decidirá igualmente del derecho á la adjudicacion, el que se verificará ante la junta de provincia, con asistencia del juez y escribano que hubieren concurrido á la subasta en la capital.

Art. 140. En uno y en otro caso se remitirá á la Junta de ventas un testimonio formal del acto del sorteo unido al de los remates.

Art. 141. Recibida que sea por el gobernador la órden de adjudicacion, dispondrá que por el comisionado se una á los espedientes de subastas, y que, verificado esto, pase á la contaduría de Hacienda pública para la liquidacion de cargas que deban rebajarse al comprador del precio del remate (1).

Art. 142. Las cargas que están impuestas á favor de particulares y de corporaciones ó bienes que se hallen esceptuados por la ley, serán solo las que se rebajen del precio del remate, y se ejecutará por la base de un 3 por 100, ó sea un 33 y un tercio al millar en los censos consignativos y reservativos, ó bien redimibles, y de 1 ½ por 100, ó lo que es igual al 66 y dos tercios al millar en los censos perpétuos. En la provincia de Madrid no se rebajará la carga de aposento (2).

Art. 143. Si aconteciere que la finca subastada apareciese con cargas á favor de las corporaciones cuyos bienes están declarados en venta, se espresará así en la liquidacion y se formarán sus capitales segun el medio establecido en el artículo anterior, con espresion de los réditos y corporacion á cuyo favor se hallen impuestas, debiéndose tener presente que, si las cargas de que se trata en este artículo y en el precedente fuesen á pagar en especie, se liquidarán á metálico, tomando por tipo el precio medio del último decenio.

Art. 144. Esta liquidacion se verificará por la contaduría de Hacienda pública en el término de tercero dia, anotando en su registro el nombre del adjudicatario y el importe líquido que debe pagar (3).

Art. 145. Practicadas dichas operaciones, y tomada razon por el comisionado en su registro, pasará los espedientes al juez de la subasta á fin de que provea en vista de la liquidacion, que se haga saber al comprador realice el pago del primer plazo en el término de quince dias, con apercibimiento de que, pasados y no haciéndolo, se procederá á nueva subasta á su costa, y con responsabilidad á satisfacer él la diferencia que resulte entre el nuevo y anterior remate (4).

Art. 146. Hecha la notificacion, el escribano proveerá del oportuno testimonio al adjudicatario para que realice el pago del primer plazo, y de una nota con el V.° B.° del juez en que demuestre el importe del papel sellado que debe subrogarse en los espedientes de subasta hasta el acto de la toma de posesion, y dará aviso del dia en que lo verifique al comisionado de ventas para que éste lo haga á la contaduría de Hacienda pública (5).

Art. 147. Antes de realizar el pago, si el valor de la finca ó fincas adjudicadas consistiese en su total ó mayor parte en arbolados ó montes, ade-

(1) Véase la Real órden de 25 de Enero de 1867 sobre este artículo y los que siguen.

(1) Véanse las Reales órdenes de 14 de Junio de 1859 y 25 de Enero de 1867.

(2) Véanse las Reales órdenes de 4 de Julio de 1860 y 18 de Octubre de 1862.

(3) Véanse las Reales órdenes de 14 de Junio de 1859 y 25 de Enero de 1867.

(4) V. las Reales órdenes de 14 de Enero de 1856, 14 de Junio de 1859 y 25 de Enero de 1867.

(5) Véanse las Reales órdenes últimamente citadas y la de 13 de Noviembre de 1861.

más de quedar responsable al completo pago en que hayan sido rematadas, presentará el comprador fianza equivalente á la mitad en que hubiesen sido tasadas, pudiendo consistir en otras fincas, en títulos de la deuda diferida ó consolidada del 3 por 100, equivalentes á las dos terceras partes de la misma tasacion, y en acciones de carreteras (1).

Art. 148. En el primer caso se otorgará por el comprador y ante el escribano del juzgado de Hacienda pública, y con presencia del testimonio del remate, la correspondiente escritura de fianza, espresándose en ella el objeto, las fincas en cuya garantía se hipotecan y la cantidad á que quedan afectas.

Art. 149. Otorgada dicha escritura, deberá sacarse por el comprador copia, que presentará en la contaduría de Hacienda pública, á fin de que disponga que por la de hipotecas del partido donde radique la finca se tome razon y se devuelva para unirla al espediente matriz.

Art. 150. En el segundo caso, ó sea cuando la fianza consista en los valores designados antes, el comprador presentará en la tesorería de Hacienda pública, con doble factura y espresion del objeto, los suficientes á cubrir las dos terceras partes de la tasacion de la finca ó fincas, á fin de que por dicha oficina se remitan á la direccion de la Caja general de depósitos, que espedirá la correspondiente carta de pago como depósito necesario impuesto por el interesado. Este documento se remitirá á la tesorería de que procedan los valores para que la contaduría le una al espediente de su referencia, ó tomando nota de él lo entregue al comprador (2).

Art. 151. No se alzará la fianza hasta que la Hacienda reciba el total importe de las fincas adjudicadas.

Art. 152. No se exigirá la indicada fianza cuando los rematantes de las fincas de aquella especie paguen en su totalidad la cantidad por que les hubiesen sido adjudicadas.

Art. 153. Entregado por el escribano al comprador el testimonio de remate ó adquisicion, se presentará en la contaduría de Hacienda pública, la cual en vista de dicho documento espedirá cargaréme por el importe del primer plazo, á fin de que por el rematante se verifique su entrega en la tesorería de rentas, la que deberá espedir inmediatamente carta de pago, que intervenida por la contaduría se entregará al comprador, quedando en esta oficina el cargaréme unido al testimonio del remate, y uno y otro al espediente matriz que entregará el comisionado en la contaduría luego que ésta le haya dado aviso de haberse verificado el pago del primer plazo, y de que el comprador ha otorgado los pagarés ú obligaciones de que trata el artículo siguiente.

Art. 154. Los compradores están obligados á otorgar pagarés por los catorce plazos (1) en que han de satisfacer el importe en que les hubiese sido adjudicada la finca ó fincas, y por las cantidades y plazos de que trata el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo (2).

Art 155. Estos pagarés se estenderán en papel del sello correspondiente (3) por la contaduría de Hacienda pública, los que, firmados por los compradores é intervenidos por dicha oficina, se pasarán á la tesorería con dos facturas, firmándose el recibí en una de ellas por el tesorero, la cual quedará en la contaduría (4).

Art. 156. Espedida la carta de pago en los términos que se espresarán, y otorgados los pagarés por el comprador, la presentará éste al juez de la subasta para que en su vista, y uniéndola al espediente de la misma, provea auto en virtud del cual se le ponga en posesion. Esta se verificará por el mismo juez y escribano si el interesado lo solicitare, ó por medio del comisionado de ventas, ó del subalterno en cuyo distrito radican las fincas, requiriendo á los colonos ó llevadores de ellas reconozcan por dueño al comprador. En estos dos últimos casos el juez oficiará al comisionado ó su subalterno (5).

Art. 157. Si al tomar posesion, y no despues, se notase que las fincas habian desmerecido de su valor con posterioridad á la tasacion, se formará espediente, si lo solicita el rematante, y prévio reconocimiento pericial y tasacion de desperfectos, se dará cuenta á la junta de provincia, para que emitiendo su dictámen, lo remita á la superior, á fin de que acuerde el medio de indemnizar al comprador si lo creyese justo, ó la nulidad del remate, segun convenga á los intereses del Estado (6).

Art. 158. El comprador hará suyos los productos de las fincas desde el dia de la fecha de la carta de pago que acredite el del primer plazo que deba realizar; por lo tanto, recibirá de la tesorería de Hacienda pública lo que le corresponda

(1) Este artículo ha sido modificado por Real órden de 30 de Octubre de 1862. Véanse tambien las de 27 de Mayo y 6 de Junio de 1862, y 22 de Diciembre de 1867, y los arts. 84 núm. 45, y 88 núm. 22 del reglam. de 2 de Dic. de 1869.

(2) Tambien han sido modificados este artículo y los dos que le siguen, por la citada Real órden de 30 de Octubre de 1862.

(1) O los que correspondan segun la ley de 11 de Julio de 1856.

(2) V. la Real órden de 3 de Setbre. de 1855.

(3) Véase el Real decreto de 12 de Setiembre de 1864 sobre papel sellado.

(4) V. el art. 88 núm. 17 del reglam. de 2 de Diciembre de 1869.

(5) Véanse la Real órden de 12 de Febrero de 1862 y el Real decreto de 10 de Julio de 1865.

(6) Véase la Real órden de 24 de Diciembre de 1862, y el Real decreto antes citado.

en virtud del libramiento espedido por la contaduría, prévio el prorateo que hará la misma oficina por el tiempo trascurrido hasta reintegrar al comprador de lo que le pertenece (1).

Los compradores no podrán hacer variacion alguna en el arriendo hasta tanto que cumpla el año á que hace referencia el art. 28 de la ley de 1.° de mayo (2).

Art. 159. Si trascurridos los quince dias de la notificacion de que habla el art. 145, el comprador no hubiese satisfecho el primer plazo del precio del remate, se le declarará en quiebra, procediendo á sucesiva subasta de la finca ó fincas bajo la responsabilidad del comprador, el cual habrá de pagar la diferencia en contra que resultase entre el nuevo y el anterior remate (3).

Art. 160. Para hacer dicha declaracion bastará que el juez de la subasta, ó las oficinas, manifiesten al gobernador haber trascurrido el término prevenido sin que el comprador hubiese verificado el pago del primer plazo (4).

Art. 161. La tramitacion de los espedientes para la nueva subasta se arreglará en un todo á la primera, escepto la tasacion; pero se estampará en el anuncio la causa del nuevo remate, la cantidad á que ascendió en el anterior, y el nombre del rematante.

Art. 162. No se admitirá postura en los remates sucesivos que se hagan de otras fincas á ninguno que haya sido declarado en quiebra; pero si antes de la conclusion de los treinta dias del anuncio de la finca que se adjudicó á su favor, ó en el acto del remate, se presentase con la carta de pago de haber satisfecho el importe del primer plazo, se suspenderá la subasta en el punto donde se presente dicho documento, pagando todos los gastos de esta nueva subasta, y debiendo darse cuenta en el mismo dia por el comisionado al gobernador y éste á la Junta superior (5).

Art. 163. Para que tenga efecto lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, los comisionados de ventas llevarán un libro donde anotarán los nombres de los que se declaren en quiebra, número de órden de la finca y dia en que se subastó por primera vez, á fin de que si se presentase alguno llame la atencion del juez (6).

Art. 164. Cuando un comprador deje de satisfacer el dia de su vencimiento cualesquiera de los plazos sucesivos al primero, el comisionado de ventas, ó la contaduría de Hacienda pública (7) le pasarán dos cédulas de invitacion, la primera dándole el término de quince dias, y trascurridos éstos, otra con el de diez; y si á pesar de todo no hubiere verificado el pago, se procederá á conocer si el deudor tiene otros bienes de mas fácil salida que la finca ó fincas de que proceda el débito, para satisfacerle con el valor de ellas (1).

Art. 165. En el caso de no tenerlos, se declarará la finca ó fincas en quiebra, y se anunciará la subasta con cargo al quebrado de la diferencia que resulte en el precio de ambos remates, y de los gastos que se hicieren en el segundo. El deudor queda responsable al pago, que se le cobrará por los medios coercitivos de instruccion (2).

Art. 166. Las subastas de las fincas declaradas en quiebra por la falta de pago de cualesquiera de los plazos siguientes al primero, se verificarán por el juzgado de Hacienda donde le haya, mediante á que los compradores en este caso son considerados y deben ser tratados como los demás deudores á la misma por cualquier otro concepto (3).

Art. 167. Las escrituras de venta deberán otorgarse en los ejemplares impresos que la junta de ventas disponga, y por el juez de la subasta y ante el escribano que haya entendido en ella, ya se hubiese verificado esta en la capital de provincia, ó en la cabeza de partido, haciéndose espresa mencion de quedar hipotecadas la finca ó fincas al pago de las obligaciones (4).

Art. 168. Las escrituras y obligaciones se estenderán en papel del sello correspondiente.

Art. 169. De la copia de la escritura que se dé al comprador, además de tomarse razon en la contaduría de Hacienda pública, ha de hacerse tambien en la de hipotecas del partido, en los términos y tiempo que está mandado en la instruccion hipotecaria.

Art. 170. En la venta de estos bienes no se admitirán demandas de lesion ú otras dirigidas á invalidarlas, ni se adeudarán laudemios ni veintenas (5).

Art. 171. En los juicios de reivindicacion, eviccion y saneamiento, estará sujeta la Hacienda pública á las reglas del derecho, así como á la

(1) V. la Real órden de 6 de Agosto de 1860.
(2) V. la ley de 30 de Abril de 1856, y la circular de la Direccion de 9 de Enero de 1864.
(3) Véanse las Reales órdenes de 11 de Junio de 1859 y 25 de Enero de 1867.
(4) Véanse las mismas Reales órdenes.
(5) V. la Real órden de 3 de Setbre. de 1862.
(6) V. la Real órden de 25 de Enero de 1867.
(7) Hoy la Administracion económica de la provincia, segun la Real órden de 21 de Julio de 1858, y el reglam. de 8 de Diciembre de 1862.

(1) Véanse la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, que resuelve dudas sobre la inteligencia de este artículo y de los dos siguientes; la de 25 de Enero de 1867, y el decreto de 23 de Junio de 1870.
(2) Véanse las Reales órdenes de 22 de Mayo de 1861 y 25 de Enero de 1867, y el decreto de 22 de Junio de 1870, antes citados.
(3) Véanse la Real órden de 3 de Setiembre de 1862 y la del Regente de 7 de Noviembre de 1869, y el decreto antes citado de 1870.
(4) Véanse las Reales órdenes de 14 de Enero de 1856 y 17 de Febrero de 1866, y las de Gracia y Justicia de 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869.
(5) V. la Real órden de 27 de Abril de 1860.

indemnizacion de las cargas de las fincas que al tiempo de venderse no estuvieren espresadas en la escritura.

Art. 172. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, si hallándose el comprador en pacífica posesion de la finca ó fincas de la nacion, fuese demandado ante cualquier tribunal sobre la misma posesion, ó sobre cargas ó servidumbres que no se hubiesen comprendido en la escritura de venta, deberá citar á la Hacienda pública para que se presente en juicio, cumpliendo la obligacion á que está tenida de eviccion y saneamiento.

Art. 173. No se admitirá por los jueces de primera instancia, ni otras autoridades judiciales, demanda alguna contra las fincas que se enajenen por el Estado, sin que el demandante acompañe documento de haber hecho la reclamacion gubernativamente y sídole negada (1).

Art. 174. Cuando un gravámen ó derecho cualquiera sea reclamado contra la finca ó fincas vendidas, y fuese declarado legítimo, ya gubernativamente, ya por los tribunales, el comprador podrá reconocerlo, á condicion que se le rebaje el capital del importe de las obligaciones que tenga pendientes, ó manifestar su negativa para que la junta superior acuerde lo que crea conveniente.

Art. 175. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 24 del tít. V, de la ley de 1.° de Mayo, están exentos del derecho de hipotecas los bienes que se enajenen en virtud de la misma ley en las ventas y reventas, durante los cinco años siguientes al dia de su adjudicacion (2).

Art. 176. A todo comprador que lo solicitare se le entregarán, prévia órden de la Junta superior, los títulos de propiedad de sus fincas, siendo obligacion de la contaduría tomar nota circunstanciada de la fecha del otorgamiento de la escritura de adquisicion, escribano ante quien pasó ésta, dia en que se tomó razon en el oficio de hipotecas del partido, y demás circunstancias precisas que puedan interesar al Estado (3).

Art. 177. Los peritos á quienes se justifique soborno, cohecho, ú otros cargos de semejante naturaleza, quedarán separados de su cometido, y entregados á la accion de los tribunales (4).

Art. 178. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas ni derribarlas, sino despues de haber afianzado ó pagado el precio total del remate.

(1) Véanse la Real órden de 11 de Abril de 1860, el Real decreto de 10 de Julio de 1865, y la Real órden de 13 de Agosto de 1866.
(2) Véanse las Reales órdenes de 30 de Julio y 16 de Octubre de 1860, y 30 de Abril de 1866.
(3) Véase la circular de la Direccion de 5 de Febrero de 1856, y el art. 16 del Real decreto de 10 de Noviembre de 1864.
(4) Véase el decreto de 22 de Diciembre de 1868.

Art. 179. El tipo para la subasta de todas las fincas será el mayor que resulte entre la tasa y la capitalizacion (1).

Art. 180. Los testimonios de remate han de estenderse y remitirse á la Junta superior, haya ó no postor.

Art. 181. En las fincas en que no le hubiese, y cuyos remates se hubieran celebrado en Madrid, en la capital de provincia y en el partido, la Junta de ventas cuidará de ponerlo en conocimiento del gobernador, á fin de que éste señale dia para nueva subasta (2).

Art. 182. En las que solo se hubiesen subastado en la capital de provincia y del partido, el gobernador dispondrá se celebre nuevo remate.

Art. 183. En los casos de que tratan los artículos anteriores, las subastas se anunciarán igualmente en los *Boletines oficiales*, con la sola diferencia de que en estas no han de mediar mas que veinte dias desde el anuncio al remate, y que para este servirá de tipo el menor valor dado á la finca (3).

Art. 184. En los testimonios de las que se subasten bajo dichas bases, se hará mencion del primer remate y de la cantidad que sirvió de tipo para éste.

Art. 185. No se procederá á la retasa de ninguna finca sin prévia órden de la Junta superior y sin que se hubiesen celebrado dos remates; el primero por la cantidad mayor de la tasacion ó capitalizacion, y el segundo por la menor de éstos dos tipos (4).

Art. 186. Los compradores deberán pagar por la tasacion de edificios hecha por los peritos autorizados para ello, distribuyéndose entre los que sean nombrados, las cantidades que se designan en la siguiente tarifa:

			DERECHOS DE TASACION.	
			Madrid.	Provincias.
De	1,000 á	50,000 rs.	90	60
De	50,000 á	100,000.. .	125	80
De	100,000 á	150,000.. .	234	150
De	150,000 á	200,000.. .	308	220
De	200,000 á	300,000.. .	406	270
De	300,000 á	600,000.. .	560	300
De	600,000 á	1.000,000.. .	1,030	680
De	1.000,000 á	1.500,000.. .	1,560	1,040
De	1.500,000 á	3.000,000.. .	2,100	1,400
De	3.000,000 á	6.000,000.. .	3,200	2,120
De	6.000,000 á	9.000,000.. .	4,800	3,200
De	9.000,000 en adelante. . .		7,200	4,800

(1) Véase el Real decreto de 22 de Agosto de 1868.
(2) Véase dicho Real decreto.
(3) Véanse la Real órden de 10 de Marzo de 1868 y el citado decreto de 22 de Agosto.
(4) Véanse la Real órden y decreto antes citados, y el de 23 de Junio de 1870.

Art. 187. A los agrimensores aprobados por las Academias se les abonarán 30 rs. por cada dia de trabajo en las tasaciones que hagan en Madrid. En las provincias por un dia 24 rs. (1).

Art. 188. A los peritos de labranza que á falta de agrimensores aprobados se nombren para tasar las fincas, se les abonarán 16 rs. por cada dia que ocupen (2).

Art. 189. Si la finca ó fincas fueren retasadas, los derechos que se marcan en los artículos anteriores serán divididos por mitad entre los primeros y segundos tasadores.

Art. 190. Estos derechos serán satisfechos por los compradores á los comisionados principales al tiempo de verificar el primer pago de sus compras, bajo el oportuno recibo (3).

Art. 191. Los comisionados, con intervencion de la contaduría de Hacienda pública, podrán adelantar á los peritos la cuarta parte de los derechos que tengan devengados, á calidad de reintegrarlos á los mismos luego que los compradores verifiquen el pago total (4).

Art. 192. Igualmente deberán satisfacer los compradores á los jueces, escribanos y personas de quienes éstos se valgan para pregonar las fincas, por la formacion de los espedientes de subasta y espedicion del testimonio para verificar el primer pago, las cantidades que espresa la siguiente tarifa (5):

			Juez.	Escribano.	[illegible]	Total.
Desde	2,001 á	5,000 rs	8	12	4	24
Desde	5,001 á	10,000. .	12	18	8	38
Desde	10,001 á	20,000. .	18	27	9	54
Desde	20,001 á	35,000. .	24	36	12	72
Desde	35,001 á	60,000. .	30	45	15	90
Desde	60,001 á	100,000. .	36	54	18	108
Desde	100,001 á	150,000. .	44	66	22	132
Desde	150,001 á	200,000. .	52	78	24	154
Desde	200,001 á	500,000. .	68	102	24	194
Desde	500,001 á	1.000,000. .	86	130	24	240
Desde	1.000,000 en	adelante. .	136	200	24	360

Art. 193. En la provincia de Madrid, por la formacion de los espedientes de fincas que radiquen en su término, satisfarán los compradores una cuarta parte mas de las cantidades señaladas en la tarifa anterior.

Art. 194. Por todos los derechos de la triple subasta que se ha de celebrar en Madrid de las fincas de otras provincias, cuya tasacion ó capitalizacion esceda de 10,000 rs., pagará el comprador los mismos que están señalados en la presente tarifa.

Art. 195. Tanto en este caso, como en los de doble subasta, dichos derechos serán distribuidos entre los jueces, escribanos y pregoneros de los respectivos remates de la córte, provincia y partido.

Art. 196. Cuando las tasaciones ó capitalizaciones de las fincas, foros, censos ó cualquiera otra clase de bienes que se saquen á subasta no pase de 1,000 rs., las actuaciones se considerarán de oficio, y no devengarán derecho alguno los jueces, escribanos y demás funcionarios que en ellos intervengan. Los peritos tasadores percibirán 4 reales por cada una de dichas fincas (1).

Art. 197. Por el otorgamiento de las escrituras, incluso el original que debe quedar protocolizado, ha de pagarse por el comprador 10 rs. al juez y 20 al escribano; pero si escediesen de diez las fincas que se incluyan en una misma escritura, pagará además un real al juez y 2 al escribano por cada diez fincas que resulten de esceso sobre las primeras (2).

Art. 198. Cuando el valor de la finca ó fincas no sea mayor de 10,000 rs., solo pagará la mitad de los derechos marcados en el artículo anterior.

Art. 199. Si en una sola persona se hubiesen rematado varias fincas de igual procedencia, podrán comprenderse en una misma escritura si el rematante lo exigiese; pero sin cobrar mas derechos que los arriba indicados (3).

Art. 200. El pago del importe del papel sellado que ha de subrogarse en los espedientes de subasta, se hará por el comprador al verificar el primer plazo, para lo cual presentará la nota que le hubiese espedido el escribano en la contaduría de Hacienda pública, y ésta la pasará á la administracion para que, como encargada del ramo de estancadas, espida el correspondiente cargaréme por la cantidad que sea, y bajo el epígrafe de *Reintegro de papel sellado* en los espedientes de subasta de bienes nacionales (4).

Art. 201. Espedido dicho cargaréme le será entregado al comprador, en union con el que haya

(1) Véanse las Reales órdenes de 20 de Mayo de 1856 y 24 de Setiembre de 1859.
(2) Véanse dichas Reales órdenes.
(3) Véanse la Real órden citada de 20 de Mayo de 1856 y el decreto de 22 de Diciembre de 1868.
(4) Véanse las mismas disposiciones y la Real órden de 20 de Diciembre de 1858.
(5) Véanse la Real órden de 14 de Octubre y circular de 27 de Diciembre de 1855 y art. 2.° del decreto de 22 de Diciembre de 1868.

(1) Véanse las Reales órdenes de 13 de Julio de 1855, 21 de Setiembre de 1859, y 18 de Mayo de 1863.
(2) Véanse las Reales órdenes de 15 de Enero de 1856, 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869, y el art. 10 de los aranceles notariales de 11 de Junio de 1870.
(3) Véase la Real órden de 15 de Enero de 1856.
(4) Este artículo y los dos que siguen fueron reformados y sustituidos por los que contiene la Real órden de 12 de Marzo de 1856. Véase mas adelante en su lugar cronológico.

estendido la contaduría para el pago del primer plazo, á fin de que verifique el del importe de ambos en la tesorería y que ésta libre las cartas de pago á favor de aquel.

Art. 202. A ningun comprador se pondrá en posesion sin prévia presentacion de las cartas de pago que justifiquen los estremos que quedan indicados.

Art. 203. Los compradores de fincas subastadas en otras provincias que deseen hacer el pago en esta córte, lo verificarán prévia presentacion del testimonio de remate y adjudicacion, y nota del importe del papel sellado de reintegro, con aviso de la contaduría de Hacienda pública de la respectiva provincia á la de Madrid (1).

Art. 204. A dicho aviso se acompañará la demostracion de lo que por cada concepto ha de ingresar en tesorería.

Art. 205. Recibido aquel y presentados por el comprador los documentos arriba espresados, dispondrá la contaduría que la administracion de Hacienda pública estienda el cargaréme del reintegro del papel sellado, y entregado al comprador con el que, ó los que espida la contaduría, se dará ingreso en tesorería como traslacion de caudales de la provincia á que corresponda.

Art. 206. Así en estos pagos como en los pertenecientes á la provincia de Madrid, se tendrá sumo cuidado de aplicar á cada uno de los acreedores que contra sí tenga la finca, el 10 por 100 que corresponda á la cantidad que tenga derecho; y espedirá tantos cargarémes cuantos sean aquellos, para lo cual las liquidaciones de las cargas que quedan por cuenta del Estado se arreglarán al modelo núm. 4.

Art. 207. En esta córte y en las demás capitales de provincia, se publicará un periódico con el título de *Boletin oficial de ventas de Bienes nacionales*, en el cual se especificarán las fincas, censos y demás cargas de que se haya incautado el Estado, y los anuncios de subastas de las mismas.

Art. 208. A cada gobernador se remitirá un ejemplar de los números del *Boletin* que se publique en esta córte á fin de que disponga su insercion en el de su respectiva provincia (2).

Art. 209. Se esceptúan de la venta las fincas de que trata el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo; pero se publicarán en el *Boletin* y se dará conocimiento de ellas á los gobernadores de las respectivas provincias donde radiquen por los que las disfruten, con espresion de las que sean, punto en que se hallen situadas y motivo de su posesion.

Los mismos gobernadores instruirán los espedientes á que diere lugar la disposicion contenida en el párrafo décimo de dicho art. 2.°, oyendo á las oficinas y á las corporaciones á quienes sea conveniente.

Art. 210. Los gobernadores conforme vayan recibiendo dichas noticias las remitirán á la Direccion general, á fin de que disponga se abra un registro de todas, que se titulará *Fincas esceptuadas*.

Art. 211. Se publicarán, pero no se venderán los bienes, censos y demás de las capellanías que no siendo de sangre se hallen en el dia provistas; mas los poseedores están obligados á dar relacion circunstanciada de las fincas ó censos que corresponden á las mismas, nombre del fundador, cargas, fecha del nombramiento para su disfrute, y autorizacion ó persona que lo verificó y en virtud de qué facultades.

Art. 212. Dichas fincas gozarán de la escepcion ínterin vivan los actuales poseedores, y despues serán enajenadas como las demás pertenecientes al clero, entregándose á este su importe en los términos que previene la ley de 1.° de Mayo.

Art. 213. Los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos donde radiquen las fincas, así como los curas propios en cuyo archivo parroquial existan las fundaciones, inmediatamente que ocurra el fallecimiento de los poseedores de dichas capellanías, y lo mismo cuando suceda respecto á los que sirven las que están destinadas á instruccion pública, lo pondrán en conocimiento de los gobernadores.

Art. 214. Recibido que sea el aviso por éstos, dispondrán que el comisionado de ventas se haga cargo en nombre del Estado de los bienes, escrituras y fundaciones de la capellanía, y verificado así, lo pasará todo á la contaduría, dando aviso á la Direccion general del ramo á fin de que acuerde lo que juzgue oportuno.

Art. 215. Respecto de los bienes pertenecientes al clero no se practicará tasacion, y el tipo de la subasta será la capitalizacion que se gire bajo la base que marca el art. 114 (1).

Art. 216. Por consecuencia, los diocesanos respectivos dispondrán que por quien corresponda se remita á los gobernadores una nota ó estado comprensivo de los bienes que en sus respectivas diócesis se hubiesen enajenado hasta la fecha, el cual tendrá el número de órden de la finca dado en el inventario de devolucion, la procedencia y clase.

Art. 217. Los comisionados en vista de lo dispuesto en los artículos anteriores propondrán á los gobernadores se anuncien las fincas procedentes del clero, para lo cual exigirán de la conta-

(1) V. la circ. de la Direc. de 25 de Enero de 1857.

(2) Véase la R. órden de 2 de junio de 1856.

(1) Véanse en la sec. 2.ª las Reales órdenes de 10 de Setiembre de 1855, 28 de Febrero de 1856, 18 de Junio de 1862 y 24 de Mayo de 1864.

duría certificacion de la capitalizacion, renta que sirvió de tipo, número de órden y procedencia.

Art. 218. Prestada la aquiescencia del gobernador, se devolverá dicha certificacion á la contaduría para que proceda á reconocer los títulos de propiedad, libros y demás asientos correspondientes á sus antiguos poseedores, á fin de que se espresen las cargas á que esté afecta la finca; y caso de no constar, bien porque no existiesen títulos ó porque no apareciesen en los libros de asientos, se dirigirá á la contaduría de hipotecas del partido con objeto de que espida la certificacion de lo que resultase.

Art. 219. Verificado cuanto queda prevenido, se dará cuenta al gobernador por el comisionado, y si aquel acordase se saque á subasta, se practicarán las diligencias y tramitaciones que para los bienes de las demás procedencias está prevenido.

Art. 220. Los comisionados principales disfrutarán del premio de un cuartillo por 100 del importe de cada remate, que percibirán en el acto de que el comprador satisfaga el primer plazo, ó sea el que paga al contado. En iguales términos los comisionados subalternos percibirán un octavo por 100 por dicho concepto.

TÍTULO XI.—*De la venta de censos* (1).

Art. 251 Concluido el término señalado para la redencion, se procederá á la venta de los censos, foros, arrendamientos, enfitéusis y demás cargas, cuyos llevadores no la hubiesen solicitado.

Art. 252. Las subastas y tramitaciones para la enajenacion de dichos censos ó cargas, se verificarán bajo la forma prevenida para la venta de bienes correspondientes á las mismas corporaciones á que pertenecen aquellas, con la sola escepcion de que en lugar de las certificaciones de tasacion que espiden los peritos para la venta de las fincas, deberán estenderse para la de los censos y demás cargas por las contadurías de Hacienda pública referentes á la capitalizacion.

Art. 253. En su consecuencia los gobernadores, terminados que sean los seis meses, dispondrán que por las contadurías se proceda á la capitalizacion de todos los censos ó cargas que con arreglo á la ley de 1.° de Mayo corriente, art. 8.°, deban ponerse en venta, toda vez que los pagadores no hayan usado de la facultad que les concede el art. 7.° de la misma.

Art. 254. Las capitalizaciones se verificarán en los mismos términos que se previene para la redencion.

Art. 255. Los réditos que pasen de 60 rs., bajo los dos tipos marcados, esto es, al 8 y 5 por 100.

Art. 256. De igual modo se practicarán las correspondientes á los arrendamientos anteriores al año 1800, y á los censos, foros, tréudos, prestaciones y tributos, cuyo cánon ó rédito no estuviese reconocido.

Art. 257. Las respectivas á censos ó cargas cuyos tipos consten en la fundacion ó imposicion, pero que escedan de 5 por 100, se capitalizarán á los mismos que en aquellas aparezcan.

Art. 258 Hechas las capitalizaciones de cada uno de los censos ó cargas, y bajo las bases establecidas, la contaduría estenderá la correspondiente certificacion.

Art. 259. Dicho documento contendrá el número de órden que en el inventario ó registro ocupe el censo, foro ó carga de que se trate, su clase, el importe del capital en aquellos que se conozcan réditos, tipos á que están impuestos, importe anual del foro, pension ó arriendo; y si consistiese en frutos, el precio regulador y los capitales que arrojen los réditos ó rentas que en la actualidad se paguen, bajo las bases indicadas; así como tambien las fincas sobre que gravitan, su cabida, situacion, linderos y nombre de los pagadores, con todas las demás circunstancias para la debida claridad y satisfaccion de los compradores, respecto á que dichas certificaciones son equivalentes á las tasaciones que hacen los peritos para la venta de las fincas.

Art. 260. Estendidas aquellas, la contaduría las pasará al comisionado para que dando cuenta al gobernador, disponga el anuncio en el *Boletin oficial*, señalando el dia en que se han de celebrar los remates, teniendo presente al efecto que los que pasen de 10,000 reales de capital han de subastarse en Madrid, en la cabeza del partido donde radique la finca ó fincas gravadas, y en la capital de la provincia, así como cuanto está prevenido en la instruccion para la venta de bienes.

Art. 261. Cuando se trate de arrendamiento, ó enfitéusis, se advertirá en el anuncio que lo que la nacion vende es el dominio directo, pues que el útil queda á favor del colono ó enfitéuta, pagando la renta estipulada en el contrato que haya servido de base para la capitalizacion.

Art. 262. Si esta escediese de 10,000 reales, cuidará el comisionado de remitir el anuncio correspondiente á la Junta de ventas con la debida antelacion para que trascurran los treinta dias; pero si no escediese, lo verificará remitiendo dos ejemplares del *Boletin oficial* en que se publique el anuncio, que contendrá, además de las circunstancias marcadas en la certificacion que ha de espedir la contaduría, lo siguiente:

1.° Que se admitirán posturas bajo los capitales formados por la contaduría á los tipos de 8 y 5 por 100.

Y 2.° Que será preferido el rematante que hiciese postura al capital formado al 8 por 100, siempre que ofrezca pagar al contado, y 100 reales menos que la cantidad ofrecida por los que hi-

(1) V. las leyes de 27 de Febrero de 1856, 11 de Marzo de 1859 y 15 de Junio de 1866.

ciesen postura á pagar en nueve años y diez plazos (1).

Art. 263. Igualmente cuidará, luego que se haya hecho el anuncio ó señalamiento de los remates, de remitir un ejemplar del *Boletin oficial* á los jueces de primera instancia, á fin de que se proceda á la instruccion del espediente, á la fijacion de edictos en la capital del partido, y á la celebracion de la subasta, que deberá sujetarse á las reglas establecidas para la venta de fincas, siguiéndose los mismos trámites, escepto en las posturas que se admitirán bajo las dos capitalizaciones del 8 y 5 por 100 y conforme á las bases 1.ª y 2.ª que se espresan en el art. 262.

Art. 264. Los escribanos anotarán las respectivas posturas que sobre los dos tipos indicados se verifiquen.

Art. 265. En los testimonios de remate se espresarán las dos capitalizaciones que sirvieron de tipo para la subasta, la cantidad en que se hubiere rematado y sobre qué tipo, si el de 8 ó el de 5 por 100, y á favor de quién quedó, teniendo presente para ello que el preferente es el que paga al contado, siempre que la cantidad ofrecida fuese igual á la que se hubiese hecho al tipo del 5 por 100 y á satisfacer en nueve años.

Art. 266. En un mismo espediente podrán comprenderse varios foros, enfitéusis ó arrendamientos cuando sean de una misma procedencia; pero la subasta de cada uno de ellos deberá celebrarse separadamente.

Art. 267. Las demás tramitaciones, hasta el otorgamiento de la escritura de venta, estarán conformes á las reglas prevenidas para la venta de fincas y redencion de censos.

Art. 268. Los 100 rs. á que hace referencia el art. 262 se rebajarán al comprador por la contaduría al verificar el pago, haciéndose espresion de esta circunstancia en los cargarémes y cartas de pago.

Art. 269. Las escrituras de venta de dichos censos y foros se otorgarán por el juez y escribano que hubiesen entendido en la subasta.

Art. 270. Los gobernadores dispondrán que, trascurridos los seis meses desde la publicacion de la ley de 1.º del corriente Mayo, ya citada, remitan las contadurías, en el término de un mes, á la Direccion del ramo nota ó lista de todos los censos, foros y demás cargas cuya redencion no se hubiese pedido, con espresion de procedencias, número de órden del registro de inventario, clase, réditos ó cánon.

Artículo adicional. El pago del laudemio en los enfitéusis, que por el art. 10 de la ley de 1.º del corriente se previene será á cargo de los compradores, debe entenderse que es aquel que gravita sobre la finca que las corporaciones á que se refiere la misma en su art. 10 poseian con dicha carga; circunstancia que se espresará en el anuncio, así como que el Estado no enajena mas que el dominio útil, pues el directo corresponde al que donó, y por consiguiente que el laudemio que en la trasmision se devenga, será satisfecho por el comprador sobre el valor que hubiese servido de tipo para la subasta.»

(1) Véase el art. 1.º de la ley de 11 de marzo de 1859, que modificó los tipos para la redencion y venta, y la Real órden de 13 de Marzo de 1861, que resuelve lo que ha de hacerse cuando no se obtuviere postura en la primera subasta de censos.

Real órden de 8 de julio de 1855.

En vista de una consulta referente á la designacion de los escribanos que hayan de actuar en los espedientes de subastas y demás procedimientos relativos á la venta de bienes nacionales, conforme á lo prevenido en el art. 102 de la instruccion de 31 de Mayo último; se resuelve, que intervengan y actúen en este servicio todos los escribanos de número de los juzgados, alternando con el especial de rentas en las capitales de provincia.

Real órden de 13 de julio de 1855.

Se resuelve, que los beneficios concedidos á los compradores de bienes nacionales en el art. 196 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, sean estensivos á los espedientes que traten de fincas, cuya tasacion ó capitalizacion no pase de la cantidad de 2,000 rs. (1).

Real órden de 21 de julio de 1855.

Se resuelve: «1.º Que los comisionados de ventas, luego que realicen la de las fincas y censos declarados en venta por la ley de 1.º de Mayo, y dejen cumplidas las obligaciones que les impone la instruccion de 31 del mismo Mayo último, hasta dejar fenecido el espediente á punto que los interesados hagan la entrega al contado y suscriban los pagarés, cesen de entender en la realizacion de estos valores, quedando estas funciones cometidas á la administracion provincial.

2.º Que las administraciones principales de Hacienda pública entiendan en la realizacion de dichos valores con intervencion de las contadurías, atemperándose á las reglas que establece para los comisionados de ventas la instruccion de de 30 de Junio último, y que rindan las cuentas de rentas públicas por lo relativo á los espresados valores, y la de deudores al fondo especial de ventas por los bienes de propios, beneficencia é instruccion pública, cuya formacion estaba enco-

(1) Véase la Real órden de 18 de Mayo de 1860.

mendada á aquellos funcionarios por los arts. 79 y 81 de dicha instruccion.

3.° Que por consecuencia de las dos disposiciones que preceden, quede sin efecto para los comisionados de ventas el art. 101 de la Real instruccion de 31 de mayo, que les encargó la gestion para el cobro de los plazos, pasado su vencimiento, entendiéndose esta obligacion para con las administraciones, así como la que impone el art. 22 de la de 30 de junio, y los demás que se refieran en ella á los valores cuya realizacion se comete por la primera disposicion á las administraciones de provincias.»

REAL ÓRDEN DE 3 DE AGOSTO DE 1855.

«Enterada la reina (q. D. g.) de la consulta elevada por V. S. en 7 de julio próximo pasado, acerca de la manera en que deban enajenarse los terrenos comunales en que nazcan aguas, cuyo aprovechamiento corresponda á los vecinos propietarios y terratenientes para el riego de sus tierras, y considerando que el Estado, por la ley de 1.° de mayo último, se ha constituido en legítimo sucesor de los derechos y obligaciones de las corporaciones municipales y demás á que la misma se refiere respecto de sus bienes, sin alterar en manera alguna unos ni otras, y sin variar ni modificar en ningun concepto el derecho de propiedad que ha simplemente trasladado, se ha servido resolver, de conformidad con lo informado por la Asesoría general de este Ministerio, que las fincas que se enajenen pasen á los compradores con todas las servidumbres que sobre sí tengan y hayan adquirido por cualquiera de los medios legítimos conocidos en el derecho, teniéndose presente su importancia al verificar la tasacion, y haciéndose la declaracion debida en los espedientes para evitar dudas y cuestiones ulteriores.»

REAL ÓRDEN DE 3 DE SETIEMBRE DE 1855.

Se resuelve: «1.° Que el papel correspondiente para la estension de los pagarés ú obligaciones á que se refieren los artículos 155 y 168 de la Real instruccion de 31 de Mayo último, sea el del sello 4.° estampado en pliego de marca comun. 2.° Que por la Direccion general de estancadas se proceda inmediatamente á disponer se impriman y timbren en la fábrica nacional del Sello los referidos pagarés ajustados á los modelos circulados por esa Direccion general. 3.° Que la propia Direccion general de estancadas remita con toda urgencia los espresados documentos á las capitales de provincia para su espendicion como las demás clases de efectos timbrados.»

REAL ÓRDEN DE 25 DE SETIEMBRE DE 1855.

«Enterada S. M. la Reina (q. D. g.) de la consulta hecha por esa Direccion general sobre si la impresion de las escrituras de redencion de censos y ventas de bienes nacionales, acordada por Real órden de 20 del actual, ha de hacerse en papel comun, se ha servido S. M. resolver, de conformidad con lo propuesto por V. I. y tesorería general de este Ministerio, se cumplimente la mencionada Real órden verificando la impresion de dichas escrituras en papel comun, mandando que los escribanos ante quienes se otorguen agreguen á las mismas bajo su responsabilidad personal el papel del sello correspondiente, como así se ha venido verificando, y previniendo que los jueces de primera instancia no autoricen aquellas sin que se haya llenado este requisito para evitar de esta manera la defraudacion de la renta.»

REAL ÓRDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1855.

Se declara, «que la Real órden de 8 de Julio último recayó como consecuencia de ampliacion á lo prevenido en el art. 102 de la instruccion de 31 de Mayo de este año, relativamente á los espedientes é incidencias de ventas, mas no respecto al otorgamiento de escrituras de redenciones de censos, para cuya formalizacion designó separadamente la instruccion de 31 de Mayo en su artículo 247 quien habia de entender; y que en su consecuencia y observancia de este artículo, las escrituras de redenciones de censos deben ser otorgadas esclusivamente por los jueces y escribanos especiales de Hacienda, turnándose entre estos últimos y los numerarios en el despacho y actuaciones de las subastas y demás asuntos é incidencias que se refieran á ventas, con arreglo á lo dispuesto en el art. 102 de la instruccion citada y Real órden de 8 de Julio último, entendiéndose dicho turno, para evitar nuevas dudas y reclamaciones, el que formando un solo cuerpo los escribanos de número y el especial de Hacienda, se reparta un espediente de los que se incoen á cada uno de sus individuos.»

REAL ÓRDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1855.

«He dado cuenta á S. M. la Reina (q. D. g.) del espediente instruido en esa Direccion general con motivo de las dificultades que se oponen respecto á las islas Canarias al cumplimiento de lo que previene el art. 5.° de la ley de 1.° de Mayo último, por el que se dispone que cuando el valor de tasacion de una finca ó suerte que se venda esceda de 10,000 rs., además de las dos subastas que han de verificarse en el partido y la capital de la provincia, tenga lugar otra en esta córte. Enterada S. M., y conformándose con el parecer del Tribunal contencioso-administrativo y el de esa Direccion general, se ha servido ampliar á 60 dias para aquellas islas el plazo de los 30 que respecto á los

remates de fincas en la Península previene la instruccion de 31 de Mayo último y que al designar el gobernador civil el dia de los remates con arreglo á los artículos 121 y 122 de la citada instruccion, prevenga al comisionado remita á esa Direccion por el primer correo los correspondientes anuncios, á fin de que V. I. pueda disponer su insercion en el *Boletin oficial* de ventas de esta córte, de suerte que estén anunciadas las fincas los 30 dias á lo menos que está prevenido por la instruccion; y finalmente, que quede sin efecto la Real órden de 15 de Setiembre último, por la que, como medida interina, se suprimia la triple subasta en esta córte.»

REAL ÓRDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 1855.

«Enterada la Reina (q. D. g.) del espediente que V. I. consulta, promovido por los jueces de primera instancia de esta córte, sobre los inconvenientes que ofrece el que cobren parcialmente en las provincias los derechos que les corresponden en las triples subastas que se verifican en Madrid para la enajenacion de los bienes nacionales, S. M., conformándose con el dictámen de esa Direccion general, se ha dignado resolver: que los derechos que devenguen los jueces, escribanos y demás funcionarios que actúen en las subastas triples, sean cobrados por los comisionados principales de ventas de las provincias, así como lo verifican con los respectivos á los peritos en virtud del art. 190 de la instruccion de 31 de Mayo último; que las cantidades que produzcan, deducido el 3 por 100 por premio de recaudacion, las tengan á la órden del comisionado principal de la provincia de Madrid, y que éste, prévio avenimiento con los partícipes, disponga la traslacion de fondos y su reparto con arreglo al art 192 de la instruccion citada.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1855.

«Conformándose la Reina (q. D. g.) con lo espuesto por esa Direccion general y la de rentas estancadas respecto á la clase de papel con que debe reintegrarse el invertido en los espedientes de subastas de bienes nacionales, se ha servido mandar que las diligencias sean estendidas en papel del sello de oficio á tenor de lo prevenido en el art. 19, caso noveno, del Real decreto de 8 de Agosto de 1851, y el reintegro consista en la regulacion de aquel como del sello cuarto, por su analogía con los instrumentos públicos que designa el art. 6.° del precitado Real decreto.»

CIRCULAR DE 27 DE DICIEMBRE DE 1855, ESPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES.

Se previene á los funcionarios que entiendan en las subastas de fincas, que en ningun caso pueden exigir á los compradores mas derechos que los marcados en los artículos 192 y 194 de la instruccion de 31 de Mayo, los cuales deberán distribuirse segun previene el art. 195 de la misma.

REAL ÓRDEN DE 3 DE ENERO DE 1856.

Se resuelve, «que en todos los espedientes de ventas de bienes nacionales que se incoen desde la fecha, se esprese por los peritos tasadores, despues del resultado de la operacion por la medida usual, el que corresponda asimismo segun el sistema métrico decimal, sirviendo de regulador la tabla de correspondencia entre pesos y medidas aprobada en Real órden de 28 de Junio de 1851, publicada en la *Gaceta* del dia 29 del propio mes, á fin de que, ultimado que sea el espediente, puedan hacerse constar aquellas circunstancias en la escritura que se otorgue (1).»

REAL ÓRDEN DE 14 DE ENERO DE 1856.

Se resuelve, que los compradores elijan ante cuál de los jueces que hayan presidido la doble ó triple subasta, deseen otorgar la escritura, observándose las reglas siguientes:

1.ª «Que hecha al comprador la notificacion de adjudicacion que previene el art. 143 de la instruccion por el juez en cuyo estrado se haya hecho la postura mayor, designe, dentro de las 48 horas subsiguientes, ante qué juez de los que hayan presidido la doble ó triple subasta desee otorgar la escritura de venta.

2.ª Que si dentro de dicho término tuviera lugar la cesion del remate para que autoriza el artículo 103, regla 7.ª de las atribuciones de los jueces, el cesionario no tendrá mas plazo para usar de dicho derecho de eleccion que las 48 horas concedidas al primitivo rematante.

3.ª Que trascurridas éstas sin que uno ú otro lo hayan designado, sea otorgada la escritura por el juez en cuyo estrado se hizo la postura mayor, y en tal concepto es el que notifica la adjudicacion de la finca ó fincas.

4.ª Que éste quede obligado á dar aviso al gobernador de la provincia en que estas radiquen, y en cuya contaduría debe archivarse el espediente del juzgado á que éste sea remitido, á fin de que pueda reclamarse ó hacerse cargo en caso de demora ó estravío.»

REAL ÓRDEN DE 15 DE ENERO DE 1856.

Se resuelve lo siguiente:

«1.° Los compradores de fincas ó censos y los

(1) Véase la Real órden de 21 de Febrero del mismo año.

redimistas de estos últimos satisfarán por el otorgamiento de cada escritura los derechos que á continuacion se espresan:

CAPITAL QUE REPRESENTA LA ESCRITURA. *Reales vellon.*	Al juez de oficio.	Al escribano de oficio.
Hasta 100..	»	»
De 101 á 500.. . .	4	8
De 501 á 3,000. . .	5	10
De 3,001 á 10,000. . .	6	12
De 10,001 á 15,000. . .	8	16
De 15,000 en adelante. .	10	20

2.° Que estos derechos se apliquen segun el capital total á que asciendan las diferentes fincas ó censos que respectivamente se comprendan en la escritura; exigiéndose además un real para el juez y dos para el escribano por cada 10 fincas ó censos que resulten de esceso sobre las primeras, á tenor de lo dispuesto en la segunda parte del art. 197 de la instruccion de 31 de Mayo del año último.

3.° Que la facultad concedida por el art. 199 de la misma para comprender en una escritura varias fincas de igual procedencia, es tambien estensiva á las ventas y redenciones de censos.

Y 4.° Que los derechos espresados en la regla primera lo sean por toda la actuacion, incluso el original de la escritura que debe quedar protocolizado; pero sin perjuicio del reintegro del papel correspondiente al instrumento público que se otorga, el cual está sujeto á lo dispuesto en la ley é instruccion de 8 de agosto de 1851 (1).»

REAL ÓRDEN DE 15 DE ENERO DE 1856.

Se declara, «que continúe la admision de valores presumibles de partícipes legos en diezmos en consignacion al pago de bienes nacionales con las precauciones establecidas en el art. 16 de la Real instruccion de 28 de Mayo de 1846, si bien limitando esta facultad á las fincas vendidas con anterioridad á la ley de desamortizacion de 1.° de Mayo último.»

REAL ÓRDEN DE 1.° DE FEBRERO DE 1856.

Se resuelve, de acuerdo con el Consejo de Ministros, que el art. 111 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se modifique en los términos siguientes: «Se declaran divididas todas aquellas fincas que lo estén por su naturaleza ó se hallen en diferentes términos ó pagos, aunque su cultivo corra á cargo de uno ó mas colonos, así como tambien las heredades ó fincas de grande estension que en el dia se cultiven en suertes ó pequeñas porciones; sin embargo podrán acumularse para una sola subasta diferentes prédios, siempre que sean de una misma procedencia, radiquen en un mismo término ó partido municipal, y su valor en tasacion ó capitalizacion no esceda de 10,000 rs., debiendo ser circunstancia precisa para llevar á efecto esta medida el que la Diputacion y junta provincial de ventas estén conformes en la conveniencia de que así se verifique (1).»

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE VENTAS DE 5 DE FEBRERO DE 1856.

La Junta superior de ventas, en sesion del dia 1.° del corriente mes, conformándose con lo propuesto por esta Direccion general y dictámen del Sr. Asesor del Ministerio de Hacienda, se ha servido acordar, que los títulos primordiales de las fincas enajenadas por el Estado á virtud de la ley de 1.° de Mayo del año anterior, no pueden ni deben sen entregados á los compradores que los reclamen hasta tanto que no hayan sido satisfechos por completo los importes totales de los remates: sin embargo, como medio de conciliar los intereses del Estado con los de los particulares que se interesen en la adquisicion de fincas nacionales, ha tenido á bien disponer que en el caso de convenir á los intereses de un comprador obtener noticias sobre la finca ó fincas adquiridas, se le franqueen por las oficinas, prévia órden del gobernador civil de la provincia, los títulos primordiales ó cualesquiera otros documentos que tengan relacion con ellos, permitiendo que dentro del mismo archivo se saquen los testimonios suficientes á su deseo (2).»

REAL ÓRDEN DE 12 DE FEBRERO DE 1856.

Se resuelve por el Ministerio de Hacienda, «que sin la menor dilacion y con las formalidades debidas se espidan las órdenes convenientes por los ministerios de Fomento, Gobernacion y Guerra para que los institutos y corporaciones dependientes de ellos hagan entrega á las respectivas contadurías de Hacienda pública de las provincias de los títulos primordiales de todas las fincas enajenables por la citada ley, que por cualquier título corran á cargo de dichas corporaciones ó dependencias de los insinuados ministerios, á fin de no paralizar la marcha constante y rápida de la desamortizacion.»

(1) Hoy en el R. decreto de 13 de setiembre de 1861.

(1) Véanse las Reales órdenes de 22 de Julio de 1859 y 7 de Marzo de 1868, y la circular de la Direccion de 9 de Octubre de 1862.

(2) V. el art. 16 del R. decreto de 11 de Noviembre de 1864.

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE VENTAS DE 16 DE FEBRERO DE 1856.

«La Junta superior de ventas, en sesion del dia de ayer, conformándose con lo propuesto por esta Direccion general, y dictámen del señor Asesor general del Ministerio de Hacienda, se ha servido acordar que las diferencias en las fincas rematadas en quiebra sean de cuenta del rematante, á no ser que en el término señalado por la instruccion vigente hiciese cesion, en cuyo caso se exigirán al cesionario las garantías de responsabilidad que previene la misma en su art. 103; pero si el señalado por tal no aceptase la cesion ó no pudiera prestar dichas garantías, la responsabilidad será del rematante, porque en este caso ha obrado en nombre propio.»

REAL ÓRDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1856.

«Enterada S. M. de lo espuesto por esa Direccion general respecto de las dificultades que puede ofrecer en algunas provincias el cumplimiento de la Real órden de 3 de Enero próximo pasado, por cuanto los peritos que deben entender en las tasaciones no tendrán los conocimientos suficientes para ajustar las operaciones del sistema métrico-decimal, se ha servido autorizar á esa oficina general para que ocurra á resolver las dudas que se ofrecen, en el concepto de que los peritos examinados tengan la obligacion de practicar la reduccion prevenida en la Real órden de 3 de Enero citada: que los gobernadores y comisionados de ventas elijan los indivíduos que reunan los conocimientos necesarios para efectuarlo; y que en una carencia absoluta de ellos, y teniendo que valerse de peritos de labranza sin examinar, las contadurías de provincia practiquen la reduccion al sistema métrico-decimal, á continuacion de la operacion de mensura usual practicada por aquellos.»

LEY DE 27 DE FEBRERO DE 1856.

«Artículo 1.° Se declaran comprendidos en el artículo 1.° de la ley de desamortizacion los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, los treudos, foros, los conocidos con el nombre de *carta de gracia*, y todo capital, cánon ó renta de naturaleza análoga, pertenecientes á manos muertas, las que están sujetas á la ley de 1.° de Mayo.

Art. 2.° Se declaran como censos, para los efectos de esta ley, los arrendamientos anteriores al año 1800, que no escediendo de 1,100 rs. anuales en su orígen ó el año último, hayan estado desde la citada época en poder de una misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna alteracion en las rentas en épocas posteriores. Lo mismo se entenderá si la renta escede de 1,100 rs., con tal de que la finca esté dividida entre dos ó mas partícipes, si cada uno de ellos no paga actualmente mas de la referida suma.

Art. 10. Se declaran estinguidos los censos pertenecientes al Estado y al clero regular ó secular que graviten sobre fincas de igual naturaleza, y que lleguen á venderse, haciéndose los respectivos abonos de capitales á cada uno de los propietarios del censo estinguido y de la finca vendida.

Art. 11. En las fincas vendidas á censo por ayuntamientos ú otras manos muertas que tuvieran sobre sí anteriores gravámenes en favor de otras manos muertas, y no se rebajasen en la subasta, el poseedor, con solo hacer la redencion del censo mas moderno que comprendia todo el valor de la finca, se entiende que redime los restantes gravámenes, haciéndose los oportunos abonos como queda indicado en el artículo anterior.

Art. 13. Los censos pertenecientes á particulares, que graviten mancomunadamente con hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, sobre dos ó más del mismo, ó sobre una sola que haya de dividirse para su enajenacion, se admitirán por el valor que resulte, capitalizándolos al 5 por 100 de sus réditos ánuos, en pago del precio en que se vendiesen las fincas hipotecadas á su seguridad.

Si los referidos capitales tuviesen en la escritura de imposicion la cualidad de que se habian de redimir, ó devolver íntegros para el caso de estinguirse ó enajenarse sus hipotecas, se admitirán en pago por todo su valor.

Se declaran como censos con hipoteca mancomunada aquellos que enajenó el Estado á particulares sobre fincas indeterminadas de cualquiera de los caudales desamortizados por la ley de 1.° de Mayo, y cuya hipoteca especial no conste, bastando para acreditar su derecho, y que se admitan en pago al 5 por 100, la escritura de venta que otorgó el Estado (1).

Tambien podrán los censualistas de que habla este artículo, durante el plazo de seis meses, contados desde la publicacion de la presente ley, optar por la redencion del censo que les pertenezca, capitalizando la renta al 6 por 100 y cobrando su importe á proporcion que se haga efectivo el valor de los bienes sobre que estaba impuesto.

Art. 17. Se amplia por seis meses mas, á contar desde la publicacion de la presente ley, el plazo que se concedió en el art. 7.° de la de 1.° de Mayo para la redencion de los censos. Este plazo

(1) Véanse los arts. 30, 31 y 32 de la ley de 11 de Julio de 1856, y el 1.° de la Real órden de 3 de Mayo de 1860.

podrá prorogarle el Gobierno por seis meses. Este término se contará en los censos sobre que hay litigio pendiente desde que se declare la ejecutoria ó desde que el censatario se allane al reconocimiento (1).»...

REAL ÓRDEN DE 13 DE MARZO DE 1856.

Se reforman los arts. 200, 201 y 202 de la instruccion de 31 de Mayo del año último en los términos siguientes:

«Artículo 200. El reintegro del papel sellado que corresponda subrogar en los espedientes de subastas de bienes nacionales se verificará en el papel especial que para este objeto creó el Real decreto de 8 de Agosto de 1851 (2).

»Art. 201. El comprador le presentará, juntamente con la nota que al efecto le libre el escribano actuante en la subasta, en la contaduría de Hacienda pública, la que, practicando en los pliegos las anotaciones correspondientes, entregará al interesado las respectivas mitades, que obrarán en su poder los efectos de cartas de pago, remitiendo las otras á aquel funcionario para que las una al espediente.

»Art. 202. Las contadurías de Hacienda pública remitirán á la Direccion general de ventas, el último dia de cada mes, nota de la cantidad á que en el mismo asciendan los diferentes reintegros intervenidos.»

LEY DE 25 DE ABRIL DE 1856.

«Artículo 1.° Los arrendamientos de prédios rústicos, fábricas y artefactos enajenados ó que se enajenen á virtud de la ley de 1.° de Mayo de 1855, caducarán concluido que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesion por el comprador, segun la costumbre de cada localidad. Los de fincas urbanas 40 dias despues de la toma de posesion.

Art. 2.° Los contratos de arrendamiento de bienes que no se hayan vendido, subsistirán hasta que se cumpla el tiempo de su duracion, ó hasta que se verifique la venta, en cuyo caso tendrá lugar lo prescrito en el artículo anterior, sin otra indemnizacion que la de los abonos y mejoras existentes en el campo, segun la costumbre de cada localidad. Esta indemnizacion será de cuenta del comprador á juicio de peritos, á no ser que prefiera dejar subsistente el contrato de arrendamiento hasta que termine el plazo estipulado.

En los arrendamientos á renta y mejora que consten por escritura pública, siempre que las fincas hayan sido plantadas de viña y arbolado por los colonos, habrá lugar á la indemnizacion pericial cuando aquellas se vendan antes de espirar el plazo señalado en la escritura, á no ser que el comprador deje el disfrute de la finca al arrendatario hasta cumplir aquel plazo.

Art. 3.° Continuarán arrendándose en pública subasta los prédios, así rústicos como urbanos, al espirar los contratos actuales con sujecion á las reglas establecidas en los artículos precedentes.

Art. 4.° En los anuncios de la subasta se hará espresa mencion de la época en que debe fenecer el arriendo conforme á las disposiciones de esta ley.»

REAL ÓRDEN DE 20 DE MAYO DE 1856.

Vista la conveniencia de introducir algunas modificaciones en los artículos 112, 187, 188 y 191 de la instruccion de 31 de Mayo del año pasado, referentes á los honorarios que deben percibir los tasadores de fincas desamortizables, se resuelve:

«1.° Que los gobernadores de provincia, á propuesta de los comisionados principales de ventas de bienes nacionales de la misma, designen en cada partido judicial los arquitectos y peritos agrónomos que deban practicar las tasaciones de las fincas.

2.° Serán preferidos para este servicio los que se hallen autorizados con título de tales, recayendo el nombramiento ó designacion en maestros de obras, alarifes ó peritos prácticos de labranza, á falta de arquitectos ú agrónomos examinados, ó en caso de que éstos no admitieran el encargo.

3.° Respecto de las fincas urbanas continuará rigiendo la tarifa de derechos marcada en el artículo 186 de la instruccion de 31 de Mayo del año último, así como lo prevenido en el art. 112 de la misma, para que en el término de seis dias presenten al comisionado principal la certificacion de tasacion.

4.° Los agrimensores con título devengarán los derechos de 40 rs. por cada dia de los que inviertan en la tasacion de las fincas en la provincia de Madrid, y 30 en las demás provincias. A los peritos prácticos de labranza se les abonará 20 reales diarios, sin distincion de provincia.

5.° Cuando en un partido no hubiese arquitecto ó agrimensor examinado, y fuere necesario proceder á la tasacion de una finca, cuya importancia hiciera precisos conocimientos científicos, el gobernador dispondrá que pase á verificarlo uno de los otros partidos que reuna dichas circunstancias. En este caso se le abonará una cuarta parte mas de derechos.

6.° Los gobernadores podrán ampliar á diez dias el plazo de seis, señalado en el art. 112 de la

(1) Véanse las leyes de 11 de Marzo de 1859 y 15 de Junio de 1866.

(2) Hoy deberá entenderse conforme al Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 sobre papel sellado, y en el de *pagos al Estado* establecido por el decreto del Regente del Reino de 18 de Diciembre de 1869.

instruccion para la presentacion de la certificacion, siempre que á su juicio concurran circunstancias especiales para ello, pero nunca en fincas que bajen de 1,000 fanegas de cabida.

Y 7.° Los derechos de tasacion serán satisfechos á los arquitectos, agrimensores y peritos prácticos por el administrador principal de bienes nacionales, en esta forma: la mitad, en el acto en que acredite haber entregado al comisionado principal de ventas el certificado de tasacion, á cuyo efecto éste les librará el oportuno documento con que puedan hacerlo constar; y la otra mitad, cuando enajenada que sea la finca, satisfaga el comprador el total de los derechos. Los recibos de la primera mitad serán formalizados por las contadurías en los términos que dispone el art. 28 de la instruccion de contabilidad de 30 de Junio del año pasado (1).»

REAL ÓRDEN DE 2 DE JUNIO DE 1856.

Atendiendo al crecido gasto que ocasionaba la publicacion de los anuncios de ventas, se dispone que la insercion del *Boletin de ventas* de esta córte, que debe hacerse en el *oficial* de las provincias con arreglo al espresado art. 208 de la instruccion de 31 de Mayo, se entienda únicamente respecto de la parte que tenga relacion con las fincas y censos que radiquen en cada provincia respectiva.

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 23 DE JUNIO DE 1856.

Dispone lo siguiente:

«1.° Que la nota ó estado del resultado de las subastas que se celebren en cada dia, se lleven ya formuladas por duplicado por el comisionado de ventas.

2.° Que uno de dichos estados adicionado con dos casillas mas, una para que al lado del nombre del rematante firme éste y en la otra el fiador si le hubiere, sea estendido por el escribano actuante. El otro, sin mas que el casillaje que hoy dia contiene, será llenado por el comisionado.

3.° Ambos estados serán firmados por el juez, comisionado y escribano. El estendido por éste con las firmas de los rematantes y fiadores se remitirá por el comisionado á esta oficina general, cerrándole antes de levantarse el tribunal y consignándose esta circunstancia en el espediente del remate. El comisionado conservará en su poder el otro estado para la comprobacion que en su dia corresponda.

4.° Que si á pesar de estas medidas resultare alguna diferencia entre estados y testimonios, la Junta superior no procederá á la adjudicacion sin depurar las causas de la equivocacion, exigiéndose, gubernativa ó judicialmente, segun la importancia, la responsabilidad á quien corresponda.»

REAL ÓRDEN DE 10 DE JULIO DE 1856.

Se resuelve, que, respecto al modo y forma de hacerse el abono de intereses á los compradores de bienes nacionales que anticipen plazos, se observe estrictamente lo prevenido en los arts. 19 y 20 de la instruccion de 30 de Junio del año último, y que en cuanto al descuento de pagarés, se verifique á voluntad de los compradores, sin atenerse al órden correlativo de vencimientos.

LEY DE 11 DE JULIO DE 1856.

«Artículo 1.° Además de los bienes comprendidos en el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, se esceptúan de la venta decretada por la misma ley:

La dehesa destinada ó que se destine de entre los demás bienes del pueblo al pasto del ganado de labor de la misma poblacion, caso de no tenerla esceptuada en virtud del art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo. El Gobierno fijará la estension de la dehesa que haya de conservarse, atendidas las necesidades de cada pueblo, oyendo al ayuntamiento y la diputacion provincial.

Art. 2.° La venta de las minas del Estado será objeto de leyes especiales.

Art. 3.° Se declaran comprendidos entre los bienes del clero, y se procederá á su venta, todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, orígen ó cláusulas de su fundacion, á escepcion de las capellanías colativas de sangre ó patronatos de igual naturaleza.

Art. 5.° La exencion que por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo se concede á la casa-morada del párroco, se entenderá de una sola casa por cada feligresía, considerándose tal párroco para este efecto al que perciba dotacion bajo este concepto.

Art. 6.° Para sacar á subasta las fincas cuya enajenacion está prevenida por la ley de 1.° de Mayo, se considerarán en dos clases, á saber:

De menor cuantía, ó sean aquellas cuya tasacion ó capitalizacion no esceda de la cantidad de 20,000 rs.

De mayor cuantía, ó sean las de 20,000 reales en adelante.

Art. 7.° Para proceder á la venta de las fincas ó de las suertes en que se dividan, se hará su tasacion en venta y renta, capitalizándose esta bajo el tipo de un 5 por 100 para los prédios urbanos.

(1) Véanse la Real órden de 21 de Setiembre de 1859 y el decreto de 22 Diciembre de 1868, que modifica algunas de estas disposiciones.

y un 4 por 100 para los rústicos, deduciéndose antes el 10 por 100 por administracion.

Art. 8.° Los bienes se dividirán para los efectos de esta ley en dos clases:

1.° Del Estado.

2.° De corporaciones civiles.

Art. 9.° Son bienes del Estado, y se considerarán como tales para los efectos de su venta:

1.° Los que llevan este nombre.

2.° Los del clero.

3.° El 20 por 100 de propios.

4.° Los de la instruccion pública superior, cuyos productos ingresen en las cajas del Estado.

5.° Los de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalen.

6.° Los del secuestro del ex-infante D. Cárlos.

7.° Los de las cofradías, obras pías, santuarios y demás manos muertas no comprendidas en el artículo siguiente.

8.° Los destinados á la cóngrua sustentacion de beneficiados y demás eclesiásticos á que se hace referencia en el art. 3.°

Art. 10. Son bienes de corporaciones civiles:

1.° El 80 por 100 de los bienes de propios.

2.° Los de beneficencia.

3.° Los de instruccion pública, cuyos productos no ingresen en las cajas del Estado.

4.° Los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y á los pueblos.

Art. 11. El Estado se incautará de los bienes del clero y de todos los demás que se detallan en el art. 9.°, reputándose como propiedad del mismo para los efectos de la venta y para la recaudacion de sus rendimientos.

Se esceptúa el 20 por 100 de propios, que seguirán administrando los ayuntamientos hasta que se verifique su venta.

Art. 12. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles que se refieren en el art. 10, continuarán administrándose por los actuales poseedores hasta que tenga efecto su enajenacion.

Art. 13. Los bienes de corporaciones civiles, incluso el 20 por 100 de propios, así de mayor como de menor cuantía, se pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 cada uno: el primero á los quince dias siguientes al de notificarse la adjudicacion, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor.

Art. 14. La redencion de censos se verificará con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 22 de Febrero de 1856; pero para gozar de las ventajas concedidas en esta última á los arrendatarios anteriores al año de 1800, será necesario que justifiquen el contrato por medio de escritura pública, ó al menos que conste de un modo auténtico en los libros, recibos, cartas de pago ú otros documentos que existan en poder del arrendatario, ó en el de la corporacion á que la finca pertenezca.

Art. 19. Los bienes pertenecientes al Estado que sean de menor cuantía al tenor del art. 6.° se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los que anticipen uno ó mas plazos no se les hará mas abono que el del 3 por 100 anual.

Art. 20. El 50 por 100 del producto de los bienes del Estado que por la ley de 1.° de Mayo se destina á la amortizacion de la Deuda pública, podrá pagarse en metálico ó en papel de la consolidada ó de la diferida.....

Art. 21. El papel de la Deuda á que se refiere el artículo anterior se admitirá por el cambio medio del valor á que se cotice el dia anterior al en que debe verificarse el pago.

Art. 22. A las personas que verifiquen la entrega en papel se les deducirá el 2 por 100 del importe del plazo que satisfagan.

Art. 23. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles, seguirán pagándose en metálico precisamente.

Art. 26. Todas las fincas vendidas hasta la publicacion de esta ley se pagarán en los plazos en que fueron anunciadas.....

Art. 29. Los censos y demás cargas fijas que tengan sobre sí los bienes de corporaciones civiles se rebajarán del precio del remate, quedando su pago á cargo del comprador (1).

Art. 30. Los créditos con hipoteca especial mancomunal sobre varios ó todos los bienes de cualquier pueblo ó corporacion, no impedirán que se vendan las fincas detallada y libremente; pero los acreedores hipotecarios de esta clase podrán elegir la finca ó fincas que tengan por mas conveniente, y cuyo valor en tasacion cubra la cantidad á que ascienda su crédito, y un 20 por 100 mas para afectar sobre ella la responsabilidad del pago (2).

Art. 31. Si los acreedores de que habla el artículo anterior no hiciesen la designacion de la finca ó fincas en en el término preciso de un mes, pasarán todos los antecedentes al juez de primera instancia del partido, para que, oyendo sumariamente á las partes, verifique dicha designacion en el término improrogable de 20 dias.

Art. 32. Las fincas á que se refieren los artículos anteriores se venderán tambien, aunque con la obligacion de satisfacer el crédito sobre ellas impuesto.

Art. 33. Cuando no pueda verificarse lo pre-

(1) Véanse las Reales órdenes de 18 de Octubre de 1862 y 14 de Enero de 1868.

(2) Sobre este artículo y los dos que siguen, véase la Real órden de 3 de Mayo de 1860. Véanse tambien las citadas en la nota anterior.

venido en los artículos 30 y 31 porque la suma de los créditos con hipoteca especial mancomunada iguale ó esceda el importe en tasacion de todas las fincas, se procederá sin embargo á la venta de estas, quedando su importe en la Caja de depósitos hasta que los acreedores ventilen sus derechos en la forma que establecen las leyes.

Art. 34. Cuando las cargas que pesan sobre una finca escedan del valor de su tasacion ó capitalizacion, se sacarán á pública subasta; y si no se presenta postor alguno en la primera, se repetirá un segundo remate; y si tampoco hubiera postor, se adjudicará al aceedor.

Art. 35. En el caso de que el arrendamiento de alguna finca hubiese sido hecho con tales condiciones que su rescision conforme á la ley haya de ocasionar graves quebrantos á juicio del Gobierno, podrá éste acordar la continuacion del arrendamiento, ó la rescision del contrato é indemnizacion de perjuicios con arreglo á la ley.

Art. 37. En las subastas de bienes nacionales solo se exigirá al mejor postor la identidad de su persona y domicilio (1).

Art. 38. Aprobada la subasta por la superioridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término marcado en el reglamento, se pondrá al instante en conocimiento del juez que hubiere presidido la subasta.

El juez proveerá auto á continuacion para que en el acto de la notificacion pague el interesado por via de multa la cuarta parte del valor nominal á que ascienda el primer pago, no bajando nunca esta multa de 1,000 rs. si dicha cuarta parte no ascendiera á esta cantidad (2).

Art. 39. Si en el acto de la notificacion no hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo momento, será constituido en prision por vía de apremio, á razon de un dia por cada 10 rs.; pero sin que la prision pueda esceder de un año, poniéndose á continuacion diligencia de quedar así ejecutado.

La prision será siempre en la cárcel de la cabeza del partido judicial.

Art. 40. Las disposiciones de los anteriores artículos se entienden sin perjuicio de la responsabilidad civil á que diere lugar la subasta en quiebra.

Art. 41. Se declaran derogadas las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones y Reales órdenes espedidas sobre desamortizacion que contradigan el tenor de la presente, quedando vigentes en lo demás.

Art. 42. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que fije las reglas de tasacion y capitalizacion, y para que disponga los reglamentos y todo lo demás que sea necesario y conducente á la investigacion de los bienes vendibles, y á facilitar la ejecucion y cumplimiento de la presente ley y de las de 1.° de Mayo de 1855, 27 de Febrero y 30 de Abril de este año.

Art. 43. Se autoriza igualmente al Gobierno de S. M. para resolver las dudas que puedan ocurrir sobre la inteligencia y aplicacion de las mismas leyes, oyendo préviamente al Consejo de Estado ó al Tribunal contencioso-administrativo, y dando cuenta á las Córtes de las alteraciones que hiciere.»

INSTRUCCION DE 11 DE JULIO DE 1856,

PARA LLEVAR Á EFECTO LA LEY DE ESTA FECHA.

«Artículo 1.° Para que puedan esceptuarse de la venta, conforme al art. 1.° de la presente ley, las dehesas destinadas ó que se destinen al pasto del ganado de labor de los pueblos en que no hubiese bienes de aprovechamiento comun destinados á este objeto, incoarán los respectivos ayuntamientos, ante el gobernador de la provincia, en el término de un mes, á contar desde la fecha en que se publique la presente instruccion en el *Boletin oficial* de la misma, el oportuno espediente ajustado á la tramitacion é instruccion prevenida en el caso 9.° del art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, haciendo constar:

1.° El vecindario del pueblo.

2.° Las condiciones agrícolas, comerciales é industriales del mismo.

3.° La estension y las circunstancias de los terrenos que se soliciten, con espresion de si corresponden á los propios ó á los comunes, y el destino que hasta ahora han tenido.

Y 4.° El número y clase de las cabezas de ganado existente, destinado á la labor.

Art. 2.° De cada una de las minas del Estado se formará por las dependencias respectivas una memoria con todos los detalles, antecedentes é informes facultativos y administrativos, la que deberá acompañar al proyecto de ley que se presente á las Córtes cuando se acuerde su enajenacion.

(En los arts. 3.° y 4.° se dictan reglas para llevar á efecto la incautacion por parte de la Hacienda de los bienes del clero y demás corporaciones eclesiásticas, y de las encomiendas de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalen, y para la espedicion de las inscripciones nominativas de renta del 3 por 100 que debian entregárseles, segun la ley, en equivalencia de lo que dichos bienes les produjeran. Y por el art. 5.° se encarga el cumplimiento del 5.° de la ley sobre que solo ha de esceptuarse de la venta una casa morada de los párrocos en cada feligresía.)

(1) Véanse las Reales órdenes de 18 de Febrero de 1860 y 25 de Enero de 1867.

(2) Véanse las Reales órdenes de 14 de Junio de 1859 y la citada de 25 de Enero de 1867.

Art. 6.° Lo dispuesto en los arts. 6.° y 7.° de la espresada ley, respecto de la nueva clasificacion de las fincas en mayor y menor cuantía y de las bases de tasacion en venta y renta, empezará á regir con las fincas cuya subasta se anuncie desde el dia siguiente á aquel en que se publique la espresada ley y esta instruccion en el *Boletin oficial de ventas* de cada provincia....

Art. 7.° Se guardará la mayor exactitud en la division de «bienes del Estado y bienes de corporaciones civiles,» que establece el art. 8.° de la propia ley, para todos los efectos de administracion y enajenacion de los mismos declarados en venta.

Art. 8.° Respecto de los bienes pertenecientes al Estado se tendrá muy presente:

1.° Que tambien es preciso llevar con la mayor exactitud su clasificacion en las ocho clases en que los divide el art. 9.°

2.° Que corresponden á la primera los bienes cuya administracion estaba en 1.° de Mayo de 1855 á cargo de los administradores de provincia; los destinados al servicio de las oficinas y establecimientos del Estado, y los de la misma procedencia que despues se hayan descubierto ó que en lo sucesivo se descubran y no hubieren sido adjudicados al clero.

3.° Que deben reputarse como bienes del clero los que primitivamente le pertenecieron y ha devuelto; los de la misma procedencia que despues se hayan descubierto y descubran en lo sucesivo, y los de otras procedencias que tambien se le adjudicaron con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 8 de Diciembre de 1851 y en la Real órden de 7 de Julio de 1852.

4.° Que el 20 por 100 de propios es la parte que corresponde al Estado en las ventas que se hagan de los bienes de las corporaciones municipales afectos á satisfacer tambien al Estado el 20 por 100 de sus productos en renta hasta la fecha de su enajenacion. Dicho 20 por 100 debe enajenarse en union con el 80 correspondiente á los pueblos, y espedirse los pagarés á plazo con la debida distincion de la parte respectiva al Estado y á los pueblos, conforme al art. 46 de la instruccion de 30 de Junio de 1855.

5.° Que los bienes de la instruccion pública superior son aquellos cuyos productos en renta figuran en los presupuestos generales de ingresos del Estado.

6.° Que como respectivos á las órdenes militares se entiendan aquellos cuyas rentas disfrutaban en 1.° de Mayo de 1855, y siguen disfrutando los actuales comendadores de las mismas, y los de la propia procedencia que se hayan descubierto ó descubran en lo sucesivo.

Los del mismo orígen que pertenecian al Estado en aquella fecha, ó que fueron adjudicados al clero, deben continuar con la aplicacion que ya tenian, para todos los efectos de la administracion, inventario, enajenacion y contabilidad.

7.° Que asimismo deben reputarse como bienes de cofradías, obras pías y santuarios los de esta clase que ya poseia el Estado en 1.° de Mayo de 1855, y los que se adjudiquen á consecuencia de lo dispuesto en el art. 9.° de esta ley; pero no aquellos de la misma procedencia que se imputaron al clero anteriormente, los cuales deben continuar considerándose como pertenecientes al mismo, así como los demás bienes de que estaba incautado, sea cual fuere su procedencia, y ha devuelto incluyéndolos en los inventarios como pertenecientes al propio clero.

Art. 9.° Se guardará la mayor exactitud en la clasificacion de las operaciones de enajenacion y realizacion de los bienes de corporaciones civiles, divididas en las clases principales que se establecen por el art. 10 de la espresada ley, y teniendo presente que hasta el acto de la enajenacion de los bienes de propios deben correr unidas las operaciones respectivas al 20 por 100 del Estado y al 80 de los pueblos.

Art. 10. La incautacion de los bienes del clero y de todos los demás detallados en el art. 9.° de la ley como de propiedad del Estado, escepto el 20 por 100 que pertenece al mismo en los de propios, se verificará por las administraciones de bienes nacionales.

Art. 11. Sin perjuicio de que los bienes de corporaciones civiles continúen administrándose por los actuales poseedores hasta tanto que tenga efecto su enajenacion conforme el art. 12 de la espresada ley, no por eso omitirán los mismos poseedores, si no lo hubieren ya verificado, el presentar á las administraciones de bienes nacionales las relaciones é inventarios prevenidos en el art. 33 de la Real instruccion de 31 de Mayo de 1855, sin escluir los bienes esceptuados por el art. 2.° de la ley de 1.° de dicho mes y año.

Art. 12. La realizacion de los 10 plazos que se establecen en el art. 13 de la ley para el pago de los bienes de corporaciones civiles, se ajustará á las reglas establecidas en el art. 22 de esta instruccion.

Art. 17. La venta y realizacion de los bienes del Estado que por ser de menor cuantía han de pagarse en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo durante 19 años, y el descuento de 3 por 100 anual á que se limita el abono á los que anticipen uno ó mas plazos, conforme al art. 19 de la espresada ley, se ejecutarán segun lo dispuesto en las instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855.

Las fincas de mayor cuantía del Estado continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que prescribe el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo del año último, y con la bonificacion del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el pago

del 50 por 100 en papel de la Deuda pública conforme á lo dispuesto en el art. 20 de la ley.

Art. 18. Para la mejor inteligencia de lo dispuesto en el art. 20 de la espresada ley se previene:....

3.° Que es tambien potestativo de los interesados el satisfacer en papel de la Deuda el todo ó parte del 50 por 100 á que asciendan los plazos que realicen.....

6.° Que son admisibles en pago del 50 por 100 del producto de los bienes destinados á obras públicas las acciones de carreteras hasta la suma de 1,000 millones mandadas emitir por la última ley votada en Córtes.....

Art. 19. En la admision del papel de la Deuda consolidada y diferida en pago del 50 por 100 de los bienes del Estado, conforme á los artículos 20 y 21 de la ley de esta fecha, se practicará lo siguiente:

1.° Será potestativo de los interesados el entregar dicho papel en las oficinas de la Deuda ó en las tesorerías de provincia en que deban realizar los pagarés.

2.° Para los efectos del art. 21 de la propia ley se entenderá como dia en que deba verificarse el pago aquel en que venzan los pagarés.

3.° Los interesados que prefieran entregar el papel en las oficinas de la Deuda pública con la puntualidad debida, recogerán cartas de pago á favor de los respectivos tesoreros, las cuales presentarán en las tesorerías dentro de los plazos siguientes al vencimiento de los espresados pagarés; 15 dias en la Península, 20 en las islas Baleares y 30 en las Canarias.

4.° Las oficinas de la Deuda espresarán en las cartas de pago las clases del papel recibido, su valor nominal, el cambio medio porque se admita conforme al art. 21 de la ley, y el valor líquido en reales vellon por que deba admitirse en pago del respectivo pagaré en la tesorería.

5.° Cuando los interesados prefieran hacer la entrega del papel en las mismas tesorerías en que existan los pagarés, presentarán los títulos en la administracion de bienes nacionales, acompañados de tres facturas, las cuales los remitirán con una de ellas á la Direccion general de la deuda pública, conservarán la otra para su resguardo, y la tercera, autorizada por el administrador é intervenida por el oficial primero, se entregará al interesado para su resguardo. La presentacion del papel en las administraciones de bienes nacionales deberá hacerse durante los plazos siguientes al vencimiento de los pagarés que se marcan en el párrafo tercero.

6.° El papel que se admita de los interesados tendrá todos los cupones desde el del semestre corriente en la fecha de la presentacion, y será taladrado en el acto, así la lámina como cada uno de los cupones.

7.° Las oficinas de la Deuda, despues de cercioradas de la legitimidad de estos documentos, les darán ingreso en su caja; espedirán las oportunas cartas de pago en los términos prevenidos en el párrafo cuarto de este artículo, y las remitirán á los administradores de bienes nacionales para que ejecuten lo conveniente á que tenga lugar el ingreso de las mismas en pago de los pagarés y de la data como por cancelacion del papel.

8.° Los interesados serán responsables de la legitimidad del papel que presenten hasta tanto que se incauten de él las oficinas de la Deuda pública.

9.° Nunca se admitirá en papel de la Deuda mayor cantidad que la que corresponda al 50 por 100, máximo que los interesados pueden entregar en el mismo. Se prohibe por consiguiente para esta clase de pagos la práctica seguida en los respectivos á las enajenaciones anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855, de recibir en papel mayor cantidad que la correspondiente al plazo ó plazos que satisfagan, y de aplicar el resto en los sucesivos.

Art. 20. El abono del 2 por 100 que se concede á los que satisfagan el todo ó parte del 50 por 100 en papel de la Deuda pública recaerá únicamente sobre la parte que no entreguen en efectivo, y para su abono se practicará lo siguiente:

1.° Los interesados cederán recibo de su importe á favor de la tesorería, y se formalizará su ingreso, considerándolo como efectivo recibido de aquellos en pago de los respectivos plazos.

2.° Se datarán dichos recibos en concepto de disminucion de los productos de la desamortizacion con el título de *Abono de 2 por 100 á los que satisfacen parte de sus plazos en papel de la Deuda pública.*

Art. 21. En vista de lo dispuesto en el art. 23 de la propia ley, solo se recibirá metálico efectivo en pago de los bienes de corporaciones civiles, cesando por consiguiente la admision de billetes del Tesoro creados á consecuencia de la ley de 14 de Julio de 1855 y la de presupuestos de 16 de Abril del año actual.

Art. 22. Lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la propia ley se observará del modo siguiente:

1.° En el momento de adjudicarse una finca ó propiedad perteneciente á corporaciones civiles, la administracion principal de bienes nacionales practicará la correspondiente liquidacion de lo que deba satisfacer el comprador, cargándole el importe del remate, y abonándole las cargas á ella afectas, y la rebaja á que tenga derecho si descuenta todos ó alguno de los pagarés.

2.° La cantidad que resulte deber pagar el interesado se dividirá en lo que pertenezca al Tesoro por premios de ventas é investigacion, gastos de tasacion y demás de enajenacion y por el 20 por 100 si la finca fuese de propios, y en el líquido

que deba resultar á favor del respectivo pueblo, establecimiento ó corporacion.

3.° En vista de este resultado el comprador formalizará el pago en la tesorería de la parte que corresponda al Estado, y en la misma en concepto de sucursal de la Caja de depósitos de lo que pertenezca al pueblo, establecimiento ó corporacion, recogiendo los oportunos resguardos.

4.° En el caso en que el interesado no descuente todos los plazos, se exigirá del primero el ingreso total en tesorería de la parte que corresponda á la Hacienda por premios y gastos de enajenacion; estenderá la administracion los pagarés de los restantes, los suscribirán los interesados é ingresarán en la Caja de depósitos para su realizacion ó destino que en lo sucesivo deban tener, la cual facilitará los oportunos resguardos.

5.° Los pagarés correspondientes al 20 por 100 que pertenece al Estado, ingresarán en la tesorería en los términos prevenidos en la instruccion de 30 de Junio de 1855.....

9.° La misma Caja de depósitos y sucursales, respectivamente, llevarán registros ó vencimientos de los pagarés de cada pueblo, establecimiento ó corporacion; los realizarán á su vencimiento y devolverán á los interesados, estampando en ellos y autorizando el signo de realizarlos, dando aviso al respectivo pueblo, establecimiento ó corporacion. Será obligatorio para los interesados el satisfacer dichos pagarés en la propia Caja ó sus sucursales dentro de los plazos marcados en el art. 19, párrafo tercero de esta instruccion, y sin perjuicio de hacerles las invitaciones que procedan.

10. Cuando los interesados no satisfagan los pagarés dentro de los plazos marcados, á pesar del recuerdo que se les haga, la Caja general de depósitos pondrá en dichos documentos el protesto por falta de pago, y los remitirá á la administracion principal de bienes nacionales de la provincia para que proceda á la instruccion del espediente de declaracion en quiebra de la finca, adeudando su importe en la cuenta especial de pagarés del respectivo pueblo, establecimiento ó corporacion, y dando parte á estos de haberlo verificado.

En los pagarés procedentes de redenciones de censos protestados por falta de pago, quedará anulada la redencion, sacándose dichos censos á la venta.

La Direccion general de la Caja de depósitos dará puntual aviso y conocimiento á la de ventas de bienes nacionales de todos los pagarés protestados que se pasen á las administraciones del ramo.

11. Los administradores principales de bienes nacionales se regirán por las instrucciones vigentes en la tramitacion y ultimacion de los espedientes de quiebra de los bienes de corporaciones civiles, á pesar de ingresar sus productos en la Caja de depósitos.

Art. 23. En vista de lo dispuesto en el primer párrafo del art. 26 de la espresada ley, y con el fin de que las alteraciones que por la misma se establecen no interrumpan en lo mas mínimo las operaciones de la desamortizacion, se considerarán como fincas vendidas hasta la publicacion de aquella, ó sea para pagarlas conforme á la de 1.° de Mayo de 1855, las ya anunciadas con arreglo á la misma y á la Real instruccion de 31 de Mayo del propio año, que se rematen despues de la insercion de aquella en la *Gaceta*, en esta forma: en la Península durante los 10 dias siguientes; en las islas Baleares 15, y en las islas Canarias 22.

Las fincas capitalizadas y anunciadas con arreglo á la espresada ley de 1.° de Mayo de 1855 y Real instruccion de 31 del mismo mes y año, cuya subasta se ejecute despues de terminados los plazos establecidos en el párrafo anterior, se pagarán conforme á la nueva ley, y esta circunstancia se anunciará al público al dar principio al remate. Se suprimirá la celebracion en Madrid de la doble ó triple subasta de las fincas que se hallen en este caso correspondientes á otras provincias, y cuyo valor no esceda de 20,000 rs.

Art. 26. Los censos y demás cargas fijas que tengan sobre sí los bienes de corporaciones civiles, serán rebajados del precio del remate en las subastas que se verifiquen desde el dia siguiente al en que termine el plazo fijado en el primer párrafo del art. 23.

Art. 27. En observancia de lo dispuesto en los artículos 30 al 34 de la espresada ley se practicará lo siguiente:

1.° Los tenedores de créditos con hipoteca mancomunada sobre todos ó varios de los bienes de cualquiera pueblo ó corporacion presentarán en la administracion principal de bienes nacionales, en el término de un mes, á contar desde la publicacion de esta instruccion en el *Boletin oficial* de la provincia, las escrituras ú obligaciones hipotecarias que legitimen sus derechos, designando la finca ó fincas sobre que deseen afectar la responsabilidad del crédito á tenor de lo prevenido en el citado art. 30 de la ley, procediéndose por los gobernadores en caso contrario segun lo prescrito en el 31, siendo de cuenta de los causantes el pago de las diligencias que con arreglo á arancel corresponda al juzgado, y demás gastos que fuera preciso hacer para llevar á efecto oficialmente la subrogacion.

2.° Instruido el espediente y practicadas las operaciones de subrogacion de la hipoteca, se dará cuenta á la junta provincial de ventas, prévio informe del promotor fiscal de Hacienda, y se remitirá á la aprobacion de la Junta superior.

3.° Prévias las espresadas formalidades, se procederá á la venta de las fincas afectas á la hipoteca, rebajando el importe del crédito del precio

del remate, y siendo su pago de cuenta del comprador.

Las fincas con hipoteca especial reconocida saldrán á la venta con iguales condiciones siempre que el acreedor presente en la administracion principal de bienes nacionales los documentos que legitimen su derecho antes de publicarse los anuncios. Publicados estos sin anunciar el crédito por omision del acreedor, le será sin embargo admitida la reclamacion y prueba de su derecho hasta el acto de abrirse el remate, en cuyo caso se hará saber á los licitadores, á fin de que lo tengan entendido, y que afectando á la finca aquel gravámen, será rebajado su importe de la cantidad en que fuese adjudicada, quedando su pago de cuenta del comprador.

4.° Si el tenedor del crédito no alegase su derecho en la época y términos anteriormente espuestos, se venderá la finca como libre de dicha carga, satisfaciéndose, en caso de ser reclamada y declarada legítima, con los productos de los primeros plazos que se realicen.

Art. 28. Siempre que los administradores notasen que el arriendo existente de una finca estuviere hecho con tales condiciones que su rescision, conforme á la ley de 30 de abril último, haya de ocasionar la indemnizacion equivalente al importe de dos anualidades ó mayores quebrantos, se instruirá el oportuno espediente, oyendo al fiscal de Hacienda y á la junta provincial de ventas, y remitiéndole á la Direccion general del ramo para la resolucion que el Gobierno estime, con arreglo al artículo 35 de la ley de esta fecha.

Art. 29. Para todos los efectos de la cuenta y razon y rendicion de cuentas, se considerarán terminadas las operaciones de enajenacion de fincas y redencion de censos desde el momento en que los compradores satisfagan el primer plazo, suscriban los oportunos pagarés de los sucesivos, ó ingresen en la tesorerías los respectivos á los bienes del Estado, y en la Caja de depósitos ó sus sucursales en las provincias los correspondientes á los de las corporaciones civiles.

En las cartas de pago ó resguardos que se den á los interesados por la entrega del primer pago y en las escrituras de venta, se hará mérito asi mismo de haber suscrito aquellos los correspondientes pagarés, espresando las fechas de sus vencimientos.

Los compradores tendrán la obligacion de presentarse en la tesorería de la provincia á realizar los pagarés á sus respectivos vencimientos.

Si trascurridos los dias marcados en el art. 19, párrafo tercero, no lo hubiesen verificado, los tesoreros procederán en los mismos términos que para los pagarés de bienes de corporaciones civiles determina el art. 22, reglas 9.ª y 10 de esta instruccion.....»

REAL ÓRDEN DE 18 DE AGOSTO DE 1856.

Se proroga por seis meses el plazo para la redencion de los censos, foros y demás cargas determinadas por la ley de 27 de Febrero último; «pero escluyendo de esta concesion los arrendamientos anteriores al año 1800, para cuyos llevadores caduque el derecho de redimir el dia 27 del corriente mes, transcurrido el cual se procederá á la venta de las fincas á que aquellos estaban afectos, con arreglo á las prescripciones de la ley de 1.° de Mayo de 1855.»

REAL ÓRDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1856.

«La Reina (q. D. g.) se ha enterado de la consulta de V. I. referente á los perjuicios que puede ocasionar al Estado la supension de las ventas de bienes nacionales con motivo de los recursos interpuestos ó que se interpongan ante el Tribunal supremo contencioso-administrativo contra las resoluciones gubernativas dictadas en los espedientes de escepcion.

Y considerando que las disposiciones vigentes establecen el principio de que las resoluciones que se adopten en los negocios en que se ventilen recíprocas obligaciones de la Hacienda y de los particulares, ó en que se controviertan derechos alegados por estos, son revocables por la vía contenciosa, y la consecuencia de semejante principio, en el caso de proponerse la demanda, debe ser por regla general la suspension de los efectos de la Real órden resolutiva del espediente y la remision de este al tribunal; que la teoría indica puede y debe sufrir modificaciones en su aplicacion, en algunos casos, para evitar abusos ó el entorpecimiento de la marcha de la administracion y los daños que con él pudieran ocasionarse al Estado, tanto más, cuanto que este ofrece siempre segura garantía para reparar cualquier perjuicio que infiera; y que las escepciones que solo se fundan en la resolucion reservada al Gobierno en los párrafos sesto y décimo del artículo 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, supuesto que el mismo Gobierno es el único juez de la procedencia y oportunidad de la medida, no solo debe ejecutarse lo que resuelva, sino que contra su disposicion no procede recurso en la vía contenciosa, porque si los tribunales pueden entender y juzgar sobre los derechos de las partes contendientes en los casos indicados, carecen absolutamente de competencia para revisar medidas de gobierno en asuntos de conveniencia pública ó de gracia; se ha dignado S. M. resolver, de conformidad con lo informado por el Asesor general de este Ministerio:

1.° Que cuando por haberse denegado la escepcion en la vía gubernativa se entable la con-

tenciosa, se suspenda por regla general la venta de la finca ó fincas de que se trate hasta la resolucion definitiva del asunto.

2.° Que si del espediente gubernativo apareciese que no existe ningun derecho al reclamante, atendidas las razones que alegue ó el título en que se funde, lo haga esa Direccion presente á este Ministerio para que, consignándose la temeridad ó mala fé de aquel, pueda acordarse el cumplimiento de la resolucion gubernativa, sin perjuicio del resultado del asunto en la via contenciosa.

Y 3.° Que en los espedientes, cuya escepcion se funde en los párrafos sesto y décimo de la ley de 1.° de Mayo de 1855, se lleve á ejecucion lo resuelto, sin ulterior recurso, toda vez que el gobierno es el único juez para apreciar la oportunidad é improcedencia de la escepcion.»

REAL DECRETO DE 14 DE OCTUBRE DE 1856.

«Artículo 1.° Se suspende, desde hoy en adelante, la ejecucion de la ley de desamortizacion de 1.° de mayo de 1855.

Art. 2.° En su consecuencia no se sacará á pública subasta finca alguna de las que dicha ley ordenaba poner en venta, ni serán aprobadas las que se hallen pendientes.

Art. 3.° El Gobierno propondrá á las Córtes la resolucion definitiva sobre la observancia de dicha ley.»

REAL ÓRDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1856.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del escrito de esa Direccion general, proponiendo varias aclaraciones para que no ofrezca dudas de ningun género la ejecucion de los Reales decretos de 23 de Setiembre y 14 de Octubre últimos, suspendiendo el primero, hasta que se resuelva lo que corresponda en la forma conveniente, la venta de los bienes del clero secular, y el segundo la ley de desamortizacion de 1.° de mayo de 1855.

Y en vista de ellas, de acuerdo con lo informado por el Tribunal contencioso-administrativo, teniendo en cuenta que el propósito del Gobierno es respetar aquellos actos, consecuencia de la mencionada ley, que se hallen perfectamente consumados, y traer sobre ellos cuantas sanciones puedan contribuir á su mayor estabilidad, se ha servido determinar:

1.° Que no se consideren comprendidos en los efectos de la suspension de la venta de los bienes del clero secular dispuesta por Real decreto de 20 de Setiembre:

Primero. Las subastas de bienes del clero secular que hayan sido aprobadas por la Junta superior de ventas, hasta el 23 de Setiembre último inclusive.....

2.° Que tampoco se consideren comprendidos en los efectos del Real decreto de 14 de Octubre último, referente á la suspension de la ley de desamortizacion, las subastas y redenciones de censos y de arrendamientos anteriores á 1800, así de bienes del clero regular de ambos sexos, como de las demás corporaciones, con tal que los espedientes hubiesen sido aprobados por la Junta superior antes del 15 del citado mes de Octubre, y por las de las provincias antes del 19 del mismo.....»

REAL ÓRDEN DE 12 DE MAYO DE 1858.

«Autorizado el gobierno de S. M. por la ley de 26 de Marzo último para plantear los presupuestos de este año, en los que se establece que se adjudiquen, con las formalidades de instruccion, los bienes del Estado, del secuestro de D. Cárlos y de corporaciones civiles, vendidos conforme á las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, antes de espedirse el Real decreto de 14 de Octubre de este último año, y cuyos remates quedaron por tanto entonces pendientes de aprobacion...., la Reina (q. D. g.) se ha servido resolver se escite el celo de los gobernadores de las provincias para que pueda verificarse la adjudicacion de las fincas anteriormente subastadas y la aprobacion de las redenciones de censos de las citadas procedencias, con sujecion á las disposiciones siguientes:

1.° Que los Gobernadores aprueben desde luego los espedientes de subastas de fincas de mayor y menor cuantía de los bienes procedentes del Estado, secuestro de D. Cárlos y corporaciones civiles, que se celebraron con anterioridad á la publicacion del Real decreto de suspension de 14 de Octubre de 1856, siempre que se hubiesen observado en dichos actos las prescripciones establecidas; remitiendo los correspondientes testimonios á esa Direccion general, para que por la Junta superior de ventas se acuerde en su vista lo que corresponda.....»

REAL ÓRDEN DE 20 DE MAYO DE 1858.

Se ordena: «que, para que en lo sucesivo se adopte una marcha constante y fija en las liquidaciones que hayan de practicarse para indemnizar á los compradores de bienes nacionales las cantidades que resultan á su favor por las cargas con que aparezcan gravadas las fincas que en concepto de libres hubiesen rematado, ó por cualquiera otra circunstancia que produzca la devolucion de alguna parte de los valores en que satisfacieron el precio de las mismas, se limite la Direccion general de propiedades y derechos del Estado, ó el centro directivo que entienda en dichas reclamaciones, á declarar el derecho que asista á los interesados para el reintegro de las cantidades que sean de abono, con referencia á los créditos en que se hu-

biesen satisfecho los pagos de los plazos de cada remate, siendo privativas de la Junta de la Deuda pública todas las operaciones consiguientes de designacion y liquidacion de las nuevas clases de valores en que, con arreglo á la ley de 1.° de Agosto de 1851, hayan de convertirse los créditos con que se satisfacieron los espresados remates.»

REAL DECRETO DE 2 DE OCTUBRE DE 1858.

«Artículo 1.° Los prédios rústicos y urbanos de propiedad del Estado, los del secuestro del exinfante D. Cárlos, los de beneficencia é instruccion pública, los de las provincias y propios y comunes de los pueblos, y los pertenecientes á manos muertas de carácter civil, declarados en estado de venta por la ley de 1.° de Mayo de 1855, continuarán enajenándose con arreglo á la misma ley y á la de 11 de Julio de 1856.

Art. 2.° Hasta que las Córtes resuelvan los tipos de capitalizacion que en lo sucesivo hayan de regir, seguirán en suspenso la redencion y venta de los censos, foros y fincas de arrendamientos anteriores al año de 1800, declaradas como censos por el art. 2.° de la ley de 27 de Febrero de 1856.

Art. 3.° Se observarán los reglamentos, instrucciones y órdenes anteriormente dictadas para la ejecucion de las mencionadas leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, en lo que se refieren á la venta de las fincas espresadas en el artículo 1.°

Art. 4.° El Gobierno dará oportunamente cuenta á las Córtes del presente Real decreto, para cuyo cumplimiento se adoptarán por el Ministerio de Hacienda las disposiciones correspondientes.»

REAL ÓRDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1858.

Se dispone, que las fincas que ya estaban tasadas y no vendidas cuando se espidió el Real decreto de suspension de 14 de Octubre de 1856, vuelvan á tasarse con las formalidades prevenidas, toda vez que el trascurso del tiempo pudiera haber alterado sus condiciones, acreciendo ó disminuyendo el valor, en el concepto de que los peritos serán responsables de la exactitud de estos aprecios, especialmente por lo que respecta á la cabida y demás circunstancias especiales de aquellas (1).

REAL ÓRDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 1858.

Se dispone, «que la remesa de los anuncios de ventas de fincas nacionales á los alcaldes de los pueblos donde estas radiquen para que los hagan fijar en los sitios públicos de costumbre, cuyo envío se hacia por los comisionados de ventas, en virtud de lo prevenido en la obligacion 9.ª marcada á estos en el art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, se verifique en lo sucesivo por los juzgados de la capital en cuyos estrados hayan de verificarse las respectivas subastas, á cuyo fin los comisionados pasarán á los espresados juzgados el competente número de ejemplares del *Boletin* en que se haya publicado la venta de las fincas, para que aquellos acuerden el auto de remesa á los alcaldes exigiéndoles recibo, estendiendo el escribano á continuacion la oportuna diligencia de haber puesto el pliego en el correo.»

REAL ÓRDEN DE 20 DE DICIEMBRE DE 1858.

Se dispone: «1.° Que tanto la mitad de los derechos de tasaciones que debe anticiparse á los arquitectos y agrimensores al tiempo de entregar concluidas las tasaciones, con arreglo á lo dispuesto en el art. 191 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y Real órden de 20 del mismo mes de 1856, como las que deban percibir al tiempo que los compradores formalicen el primer plazo de las ventas, se paguen por el Tesoro, con cargo al presupuesto especial y capítulo respectivo á gastos generales de venta de bienes nacionales. 2.° Que los derechos de tasacion de las fincas de bienes nacionales que deben satisfacer los compradores, al propio tiempo que el importe del primer plazo de las ventas, se recauden por las tesorerías con el carácter de ingresos estraordinarios de venta de bienes nacionales.....» (1).

REAL ÓRDEN DE 13 DE ENERO DE 1859.

Se resuelve, «que todos los rematantes de fincas de bienes nacionales, cuyas subastas quedaron pendientes de aprobacion por efecto del Real decreto de 14 de Octubre de 1856, y han sido ó sean adjudicadas en virtud de lo prevenido en los presupuestos generales del año próximo pasado, tienen derecho á renunciar todas ó parte de aquellas, siempre que las hubieran adquirido bajo diferentes remates, é hiciesen dicha reclamacion ante el gobernador de la provincia en que radicasen las fincas, ó ante la Direccion general de propiedades del Estado, dentro del término de un mes, á contar desde la fecha en que se publique esta disposicion en los *Boletines oficiales*.»

REAL ÓRDEN DE 9 DE FEBRERO DE 1859.

Se resuelve, «que en las sucesiones de bienes vendidos á plazos por el Estado se ha de exigir el derecho de hipotecas del valor total de las fincas, deduciendo antes el importe de las cantidades

(1) Véase en la sec. 2.ª la Real órden de 24 de Mayo de 1860.

(1) V. el decreto de 22 de Dicbre. de 1868.

que han de satisfacerse al fisco en los plazos aun no vencidos.»

LEY DE 11 DE MARZO DE 1859.

«Artículo 1.° La redencion, ó en su defecto la venta de los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, los tréudos, foros, los conocidos con el nombre de carta de gracia, y todo capital, cánon, renta ó prestacion de naturaleza análoga, pertenecientes al Estado, al secuestro de D. Cárlos, á beneficencia, á instruccion pública, á las provincias, á los propios de los pueblos, y á manos muertas de carácter civil, cuyos bienes fueron declarados en venta ó redencion por las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 27 de Febrero de 1856, se harán en lo sucesivo sobre las bases siguientes:

Primera. Los censos, cuyos réditos no escedan de 60 rs. ánuos, se redimirán al contado capitalizados al 8 por 100.

Segunda. Los censos, cuyos réditos escedan de 60 rs., se redimirán al contado, capitalizándolos al 6 y medio por 100; y en término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizándolos al 4 y 80 céntimos por 100.

Tercera. Los censos, cuyos réditos se paguen en especie, se regularán por el precio medio que haya tenido la misma especie durante el último decenio en el mercado de la cabeza del partido judicial, en cuyo territorio el censatario esté obligado al pago; y cuando los censos consistan en un tanto de la produccion, si para reducirlos á tipo fijo no fuese posible indagar los productos del decenio, servirán los del quinquenio, y en su defecto los del último bienio.

Cuarta. Los censos, cuyo cánon ó interés anual esceda de 60 rs., y el tipo reconocido en la imposicion escediese del 6 y medio por 100, se redimirán segun el mismo tipo de la imposicion si el pago lo hiciesen al contado, y al 5 por 100 si lo verificasen en el término de nueve años y 10 plazos iguales.

Art. 2.° Se concede á los censatarios de la Península é islas Baleares el plazo de ocho meses, y 10 á los de Canarias, para la redencion de los censos y demás prestaciones ó gravámenes contenidos en esta ley.

Transcurridos dichos plazos, se procederá á la venta en pública subasta bajo los tipos establecidos en el artículo anterior.

Art. 5.° Quedan vigentes, en cuanto no se opongan á la presente ley, las disposiciones contenidas en las de 1.° de Mayo de 1855, 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856, para la redencion ó venta de los capitales y demás derechos anejos á los censos y prestaciones ó tributos de cualquiera especie, espresados en el art. 1.°»

REAL ÓRDEN DE 8 DE JUNIO DE 1859.

.....«Enterada S. M., y conformándose con lo que V. I. propone, ha tenido á bien mandar, *se prevenga á los gobernadores de las provincias que, una vez anunciada la subasta en los* Boletines oficiales, *no pueden acordar la suspension de la venta*, sin que la queja ó reclamacion que la motive venga apoyada en documentos fehacientes ó pruebas legales, participando á esa Direccion general en el mismo correo, ó á lo mas en el inmediato, las causas de la referida suspension, y sin perjuicio de que desde luego se forme el oportuno espediente, para que recaiga la resolucion que corresponda; y que respecto á la suspension de señalamiento de subastas, se observe puntualmente lo que previene el art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, teniendo presente el término fatal de 15 dias que el mismo marca para la formacion del espediente, dictámen de la junta provincial de ventas y remision á la superior.»

REAL ÓRDEN DE 14 DE JUNIO DE 1859.

.....«Enterada S. M. y conformándose con lo espuesto por esa Direccion y por el Asesor general de este Ministerio, se ha servido resolver:

1.° Que recibidas que sean por los gobernadores las órdenes de la Direccion aprobando los remates de fincas que hayan quedado en el mejor postor de la subasta celebrada en Madrid, las pasen en el mismo dia á los comisionados, y éstos á su vez á las administraciones de propiedades, para que se efectúe la liquidacion de cargas, á tenor de lo prevenido en el art. 111 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

2.° Que las espresadas administraciones practiquen dicha operacion dentro de los tres dias precisamente que marca el art. 144, espidiendo la oportuna certificacion que, con el V.° B.° del gobernador, será remitida á la Direccion, la cual pasará al comisionado principal de ventas de Madrid para que, uniéndola al espediente de su razon, remita este al juez ante quien tuvo lugar la subasta para que el mismo disponga que inmediatamente se haga la notificacion al comprador.

3.° Que hecha esta segun previene el art. 146, el escribano lo avise al comisionado de la provincia donde radique la finca, con el objeto de que trascurridos los 15 dias marcados en el art. 145 sin haberse presentado el comprador á ingresar en tesorería el importe del primer plazo, solicite del gobernador la declaracion en quiebra de la finca, segun previene el art. 159 y el 160.

Y 4.° Que los espresados comisionados de las provincias den parte á los jueces de Madrid de si los compradores se han presentado ó no á realizar el primer plazo á fin de que, segun su caso, exijan

ó no la responsabilidad personal impuesta por los arts. 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 1856.»

REAL ÓRDEN DE 22 DE JULIO DE 1859.

Se resuelve: «1.° Que las fincas cuyo valor en tasacion ó capitalizacion no esceda de la cantidad de 20,000 rs., sean sacadas á venta sin practicar en ellas subdivision alguna.

Y 2.° Que las fincas de mayor cuantía, cuya division se crea conveniente sin menoscabo de su valor, se lleve á efecto en suertes que escedan de la cantidad de 20,000 rs., aun cuando al presente se hallen arrendadas en pequeñas porciones, cuidándose de que la parte de terrenos que contengan de inferior calidad se aplique proporcionalmente á todas las suertes contiguas (1).»

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 26 DE JULIO DE 1859.

A fin de evitar abusos y las dudas que puedan ocurrir sobre la personalidad legal de los que otorguen y acepten las cesiones de los remates de bienes nacionales y forma en que hayan éstas de efectuarse, la Direccion manifestó á los gobernadores:

«1.° Que las cesiones solo pueden tener lugar, ó en el acto de cerrarse el remate de la finca, ó en los dos dias siguientes á la notificacion de la adjudicacion de ésta, con arreglo al art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, regla 7.ª de las obligaciones de los jueces y 5.ª de los escribanos.

2.° Que en ambos casos se estenderá en el mismo espediente la oportuna diligencia firmada por el cedente y por el aceptante.

Y 3.° Que no se admita tampoco por los jueces la cesion si el aceptante no reuniera las condiciones de responsabilidad reconocidas en el primer rematante.»

REAL ÓRDEN DE 21 DE SETIEMBRE DE 1859.

«He dado cuenta á S. M. del espediente instruido sobre la conveniencia de modificar los artículos 187 y 188 y la última parte del 196 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, así como la Real órden del propio mes del año de 1856, relativos á los derechos que deben exigirse á los compradores de las fincas rústicas que se enajenan en virtud de las leyes de desamortizacion. Y considerando fundadas las razones en que esa Direccion apoya su propuesta, y vistos los informes emitidos sobre este asunto por el asesor general del ministerio y por la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:

Primero. Que los derechos de tasacion, que satisfarán los compradores de fincas rústicas, sean los comprendidos en la siguiente tarifa:

Fanegas.			Rs. cénts. por fanega.
De	1 á	5	12,00
De	5 á	10	10,00
De	10 á	20	9,00
De	20 á	50	6,75
De	50 á	100	3,50
De	100 á	200	2,90
De	200 á	500	2,33
De	500 á	1,000	1,00

Segundo. No se exigirá mas que el máximum de 1,000 rs., aun cuando la finca tuviera mas de las 1,000 fanegas de cabida.

Tercero. Si una finca fuera dividida en suertes para su venta, los derechos de tasacion no se regularán aplicando la tarifa segun el número de fanegas que contenga cada porcion ó suerte, sino por el que mida la finca sin dividir, prorateándose la totalidad de los derechos, así para exigirlos á los compradores de aquellas, cuanto para abonarlos á los peritos tasadores.

Cuarto. Los espresados derechos se pagarán á éstos en las épocas y forma que hoy rige, en la proporcion siguiente: cuatro quintas partes al agrimensor con título de tal, y la otra quinta parte al perito práctico de labranza. Si tanto el tasador nombrado por el gobernador cuanto el designado por la corporacion fueran agrimensores examinados, se dividirán los derechos por mitad. Si por falta de agrimensores el gobernador nombrase peritos prácticos de labranza, éstos solo devengarán la mitad de los derechos.

Quinto. Para exigir á los tasadores la responsabilidad por las operaciones que practiquen, no se apreciará la diferencia de un 3 por 100 de mas ó de menos en el número de fanegas medidas ó árboles contados; pero si escediera de este límite ú omitiesen ó variasen la clasificacion del terreno, arbolado, edificios y demás condiciones de las fincas, la Direccion de propiedades y derechos del Estado les impondrá una multa relativa á la importancia de la falta, que no baje de 100 rs. ni esceda de 500, sin perjuicio del reintegro de la demasía de derechos cobrados. La reincidencia será penada con el máximum de la multa é inhabilitacion para las tasaciones de bienes nacionales.»

REAL ÓRDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 1859.

Para remover la paralizacion que en su caso sufren los espedientes de subasta de bienes nacionales por la dificultad de hallar á los compradores para hacerles la notificacion de la aprobacion del remate acordada por la Junta superior, causal que «no debiera existir si los escribanos, ateniéndose á

(1) Véanse la circular de 9 de Octubre de 1862, y la Real órden de 7 de Marzo de 1862.

lo prevenido en el art. 23 de la ley de Enjuiciamiento civil, hicieran la notificacion por cédula, en caso de no ser habida la persona á la primera diligencia, rigiendo el término dado por aquella desde el mismo dia y continuándose la sustanciacion con arreglo al art. 29 de la dicha ley,» el Ministro de Hacienda se dirigió de Real órden al de Gracia y Justicia «á fin de que adopte las disposiciones mas eficaces para que las diligencias de notificacion á los compradores de fincas y la aplicacion de la responsibilidad que impone la ley de 11 de julio de 1856, se lleven á efecto en los términos fijados en las instrucciones, y con la actividad que la importancia de este servicio requiere, no demorándose por los jueces la devolucion de los espedientes á los comisionados de ventas, á fin de que los gobernadores puedan declarar la quiebra de las fincas no pagadas (1).»

REAL ÓRDEN DE 18 DE FEBRERO DE 1860.

«He dado cuenta á S. M. del espediente instruido por esa Direccion general demostrando las grandes proporciones en que se ha desarrollado el inmoral tráfico de rematar fincas de bienes nacionales por medio de personas totalmente insolventes y desacreditadas, con objeto de exigir cantidades convenidas á los postores que de buena fé desean la adquisicion de aquellas. Y considerando que las artes de que se valen dichas personas, conocidas vulgarmente con el nombre de *primistas*, para eludir la responsabidad que la ley les impone, son: la alteracion de su nombre y domicilio para sustraerse á la accion de los juzgados, y la cesion de las fincas en individuos para quienes la pena corporal de encerramiento ó prision no afecta á su posicion social, la Reina (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa oficina general, ha tenido á bien resolver:

1.° Que la identidad de la persona y domicilio de los postores, exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, se justifique mediante diligencia en el acto del remate ante el juez y escribano que autoricen éste, con dos testigos de notoria solvencia á juicio del juez y del comisionado de ventas, cuyos testigos admitirán la responsabilidad de manifestar, en caso de que la finca sea declarada en quiebra, cual sea el verdadero domicilio del rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incurran si hubiera existido alguna falsedad en la primera diligencia.

2.° Que no se admitan cesiones de fincas vendidas por el Estado, sin que antes acredite el cedente tener satisfecho el primer plazo del importe del remate.

Y 3.° Que se recomiende y encargue á los jueces de primera instancia, bajo su responsabilidad, el riguroso cumplimiento de los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 1856, debiendo impetrar para su aplicacion, en los casos que fuere necesario, el auxilio de los gobernadores de las provincias.»

REAL ÓRDEN DE 11 DE ABRIL DE 1860.

El Sr. Ministro de Hacienda se dirijió de Real órden al de Gracia y Justicia, «manifestándole la conveniencia de que se recomiende á las Audiencias territoriales el cumplimiento, por parte de los juzgados de primera instancia, del art. 10 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850, y el 173 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que prohiben la admision de demandas contenciosas sin que los reclamantes hayan apurado antes la vía gubernativa.....»

«Siendo igualmente la voluntad de S. M. que V. I. (el Asesor general) dé las oportunas órdenes á los promotores fiscales de Hacienda, previniéndoles que, siempre que los juzgados les hagan traslado de demandas contra la administracion ó contra particulares por hechos llevados por ésta á efecto, sin que el demandante acompañe el documento original ó copia legalizada de la resolucion negativa dictada en el asunto por la administracion gubernativa, contesten, sin entrar en el fondo de la cuestion, pidiendo la inhibicion del juzgado por carecer la demanda de la condicion, sin la cual no es procedente.»

REAL ÓRDEN DE 27 DE ABRIL DE 1860.

... «La Reina (q. D. g.) se ha servido resolver, de conformidad con el dictámen emitido por la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, que en la venta de los bienes comprendidos en las leyes de desamortizacion, no tiene lugar el derecho de tanteo ó retracto (1).»

REAL ÓRDEN DE 3 DE MAYO DE 1860.

«He dado cuenta á S. M. del espediente instruido por esa Direccion general con objeto de aclarar la forma en que debia aplicarse la legislacion dictada sobre el reconocimiento, liquidacion y rebaja de las cargas y créditos hipotecarios que pesan sobre todos ó parte de los bienes de los caudales comprendidos en las leyes de desamortizacion. Y vistas las de 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856, asi como los informes emitidos sobre el particular por las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y por

(1) V. la Real órden de 25 de Enero de 1857.

(1) Véase el art. 9.° de la ley de 15 de Junio de 1866 y la Real órden de 12 de Agosto de 1868.

el Asesor general de este Ministerio, la Reina (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido resolver:

1.° Que el art. 13 de la ley de 27 de Febrero de 1856 quedó derogado por el 30, 31 y 32 de la de 11 de Julio en cuanto disponia que los censos pertenecientes á particulares, que gravitan mancomunadamente con hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, ó sobre dos ó mas del mismo, se admitiesen en pago de las fincas que se vendieran y fueran parte de la hipoteca.

2.° Que por lo tanto lo que procede es la subrogacion de las hipotecas generales en especiales, conforme á los mencionados artículos de la ley de 11 de Julio de 1856, girándose la capitalizacion de los censos que hayan de ser objeto de la subrogacion sobre el tipo de 5 por 100 señalado en dicho art. 13 de la ley de 27 de Febrero de 1856, en cuya parte no sufrió derogacion por la de 11 de Julio siguiente.

3.° Que en los espedientes que se instruyan para hacer las subrogaciones se oiga préviamente á las corporaciones y establecimientos censatarios, haciéndose constar en aquellos con certificaciones de las secretarías de las mismas corporaciones y establecimientos, y de las oficinas de la administracion pública donde presenten sus presupuestos y cuentas anuales, que en estos documentos y en los libros cabreos constan las obligaciones censales, de que se trata, y los réditos correspondientes.

4.° Que si despues de enagenadas todas las fincas afectas en mancomun á un censo ó mas fuesen estos reclamados, se haga la subrogacion de su hipoteca sobre otra finca de las que tenga la corporacion ó establecimiento y no estuviere gravada con aquella hipoteca, quedando, en el caso de no existir finca sobre que hacer la subrogacion, hecha esta sobre la masa de inscripciones de la deuda pública que la corporacion ó establecimiento respectivo recibiere como producto de la enagenacion de sus fincas (1).

5.° Que aprobada la subrogacion, cuando ésta recaiga en fincas enajenables, se rebaje al ser vendidas, del precio del remate, el importe del capital que corresponda al rédito anual sobre el tipo del 5 por 100, como se indica en la regla segunda, practicándose al efecto las operaciones que correspondan, segun las disposiciones de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

6.° Que cuando la subrogacion haya de recaer sobre el capital de inscripciones de la deuda pública, se dé conocimiento á la Direccion general de la misma á fin de que haga las anotaciones correspondientes.

7.° Que aquellas otras cargas de que no fueren única hipoteca dos ó mas fincas enajenables, sino el conjunto de recursos de los establecimientos y corporaciones obligadas al pago, asi como los censos concejiles, puedan tambien trasmitirse sobre una finca determinada, siempre que la corporacion ó establecimiento respectivo convinieren en ello, la carga resultase legítima y subsistente segun los datos prevenidos en la regla tercera, y el acreedor lo aceptase por su parte; haciéndose la capitalizacion de la carga para la reduccion del precio del remate de la finca al 5 por 100, si el tipo primitivo á que aquella se hubiere constituido no fuese mayor, y considerando como tanto de la carga la cantidad á que hoy se halle reducida, cualquiera que haya sido en otro tiempo su importancia.

8.° En caso de desacuerdo para la subrogacion de que trata la regla precedente, quedarán gravando las cargas sobre las inscripciones de la deuda pública que se emitan á favor de las corporaciones ó establecimientos respectivos en equivalencia de sus fincas, y sobre los recursos de otra clase, que con arreglo á las escrituras de imposicion tengan aquellos.

9.° En los casos en que los establecimientos ó corporaciones que tuviesen hipotecadas sus inscripciones al cumplimiento de censos y cargas las redimieren con la autorizacion é intervencion de las autoridades á quienes tocase dispensarla, se pondrán las inscripciones en actitud de ser aplicadas á los objetos á que con arreglo á las leyes pueden destinarse, prévias las formalidades que procedan segun las mismas.

Y 10. Que conforme á las aclaraciones anteriores, los pagos hechos con capitales de censos por cuenta de fincas vendidas desde la fecha en que se publicó en la *Gaceta de Madrid* la citada ley de 11 de Julio de 1856, se anulen, reponiendo el importe de aquellos los compradores con los valores admisibles segun la legislacion vigente, quedando los censos que se hallen en dicho caso en las condiciones en que se encontrasen antes de su admision en pago de las ventas de fincas efectuadas despues de dicho dia.»

REAL ÓRDEN DE 21 DE MAYO DE 1860.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del espediente instruido en esa Direccion general á instancia de varios labradores vecinos de las villas de Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri sobre ampliacion por seis meses mas del plazo concedido por la ley de 11 de marzo de 1859 para la redencion de los censos pertenecientes al Estado, al secuestro de D. Cárlos, á beneficencia, á instruccion pública, á las provincias, á los propios de los pueblos y demás manos muertas de carácter civil; y considerando que en la espresada ley no se autori-

(1) Modificado por Real órden de 13 de Junio de 1866. Véase tambien la de 14 de Enero de 1868.

za al Gobierno para decretar la próroga que se solicita, de conformidad con el dictámen de la Asesoría general de este Ministerio y con el de la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, S. M. se ha servido resolver, que se proceda desde luego á la venta de todos los censos de las indicadas procedencias, cuya redencion no hubiesen pedido los censatarios hasta el dia de la fecha, con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Marzo de 1859.»

REAL ÓRDEN DE 4 DE JULIO DE 1860.

Se dispone, «que las cargas que gravitan á favor del clero sobre fincas desamortizadas no son rebajables del importe de la venta, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, por quedar enajenadas con las propias fincas.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE JULIO DE 1860.

Se declara, «que el derecho concedido á los compradores por el artículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 debe concretarse al anticipo de los plazos por uno ó mas años completos, y que por lo tanto no es admisible el descuento de los pagarés que vencen en este año, ni lo será en lo sucesivo el de ningun vencimiento del cual haya trascurrido alguna parte, cuando se solicite el anticipo por los interesados (1).»

REAL ÓRDEN DE 30 DE JULIO DE 1860.

Se declara, que las adjudicaciones de bienes inmuebles procedentes de los enajenados por el Estado á virtud de la ley de 1.° de Mayo de 1855, hechas en pago de deudas, están comprendidas en la exencion del impuesto hipotecario, que establece el art. 24 de la citada ley á favor de las ventas y reventas de los mismos bienes.

REAL ÓRDEN DE 6 DE AGOSTO DE 1860.

Se resuelve, «que el prorateo de las rentas prevenido por el art. 158 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, debe ejecutarse lo mismo en el caso de que las fincas se hallen bajo un contrato de arrendamiento, como en el que se ocurra á su produccion directamente por las corporaciones á que pertenecian, procediéndose en este segundo estremo á la liquidacion y rebaja de los gastos causados, que serán de abono al productor, prorateándose luego el líquido entre éste y el comprador en los términos que por punto general se encuentran marcados.»

REAL ÓRDEN DE 16 DE OCTUBRE DE 1860.

«Enterada la Reina (q. D. g.) del espediente promovido á instancia de D. Pedro del Pozo, vecino de Salamanca, en solicitud de que se le exima del pago de derechos de hipotecas por una permuta de fincas procedentes del Estado: y considerando que el espíritu de la ley de 1.° de Mayo es el eximir del impuesto, por el plazo que la misma fija, las trasmisiones de la propiedad enajenada por efecto de aquella ley; S. M. ha tenido á bien acceder á la solicitud, declarando exentas del pago de derechos de hipotecas las permutas que se verifiquen de los referidos bienes, durante los cinco años señalados por la citada ley.»

REAL ÓRDEN DE 31 DE ENERO DE 1861.

«La Reina (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en los dias en que se verifiquen subastas de venta de bienes nacionales, queden sin curso los despachos telegráficos privados, relativos á ellas.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE MARZO DE 1861.

Se resuelve, «que si en la primera subasta de censos no se obtuviere postura, se convoque una segunda con la rebaja de una sesta parte de los capitales que sirvieron de tipo para la primera; y que si tampoco se presentasen licitadores, se lleve á efecto otra tercera subasta con rebaja de una quinta parte de los espresados capitales, subsistiendo por lo demás las mismas condiciones que para los primeros remates marca el art. 262 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, respecto de la preferencia á que tienen derecho los postores que ofrezcan pagar al contado.»

REAL ÓRDEN DE 10 DE ABRIL DE 1861.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del espediente promovido por D. Zóilo y D. Fernando Fernandez, y D. Agustin del Molino, en solicitud de que, ó se les indemnice del valor correspondiente á la menor cabida que contienen la segunda, tercera y cuarta porciones de la dehesa del Alamo, procedente de la comunidad de las villas de Feria, Zafra, Morera, Alconera y la Parra, adjudicadas á su favor, ó se declare la nulidad de la venta de dichas porciones;

Y enterada S. M. de lo espuesto por esa Direccion y por la Asesoría general de este Ministerio, y considerando que las fincas desamortizadas no pueden salir á la venta como cuerpos ciertos, sino por la cabida que contengan, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 106, 110 y 123 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que previenen que dichas fincas sean medidas y anunciadas en

(1) V. la Real órden de 10 de Setbre. de 1863.

subasta con espresion de su cabida, clase, situacion, renta anual, cargas, precios de la tasacion y capitalizacion y época en que concluye el arriendo, se ha servido aprobar en todas sus partes el acuerdo de la Junta superior de ventas de 15 de Marzo último, declarando la nulidad de la subasta de la segunda porcion de la mencionada dehesa, por haber tenido lugar con error esencial en la designacion del número de fanegas de que se compone, inferior en mas de una mitad del consignado en el anuncio, y concediendo á los compradores de las porciones tercera y cuarta la indemnizacion correspondiente á la menor cabida de las mismas, en atencion á no llegar la falta á la mitad del número de las fanegas con que fueron ofrecidas en el propio anuncio de la venta; siendo asimismo la voluntad de S. M. que el caso actual forme jurisprudencia para todos los de igual naturaleza que puedan ocurrir en lo sucesivo, teniendo muy presente que los bienes desamortizables no son ni pueden ser enajenados como cuerpos ciertos, sino por la cabida ó número de fanegas que contienen (1).

REAL ÓRDEN DE 22 DE MAYO DE 1861.

...«S. M. se ha servido resolver que en las ventas de fincas procedentes de bienes nacionales, que se verifiquen por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero, se satisfaga al contado por el nuevo comprador el importe de los espresados plazos ya vencidos, espresándose así en los anuncios de subasta; y que se exija al rematante declarado en quiebra, de una sola vez y tambien al contado, la diferencia entre ambos remates y los gastos del segundo, tomando en cuenta para deducirla los pagos que hubiese hecho y el producto de las rentas de las fincas que deben abonársele en su cuenta (2).»

REAL ÓRDEN DE 27 DE JULIO DE 1861.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de la consulta promovida por ese centro directivo sobre si debe considerarse como resolucion general la Real órden de 28 de Febrero último, por la cual se reconoció á D. Francisco de las Rivas el derecho al abono del interés del 5 por 100 de las cantidades que satisfizo en metálico y en billetes en pago de varias fincas, cuya venta hubo necesidad de anular posteriormente; y considerando que las mismas razones militan en favor de cuantos se hallan en iguales circunstancias, S. M. se ha servido declarar que la citada soberana disposicion de 28 de febrero es aplicable á todos los casos en que, á consecuencia de haberse acordado la nulidad de una venta ó redencion, haya que devolver á los interesados las sumas que por tal concepto hubiesen satisfecho en metálico ó billetes, siempre que los compradores ó redimentes reintegren de las rentas ó réditos caidos hasta el dia en que se verifique la devolucion, á la Hacienda, corporaciones ó particulares propietarios de las fincas ó censos.»

REAL DECRETO DE 12 DE SETIEMBRE DE 1861.

«Art. 13. Se estenderán en papel sellado de dos reales:.... 5.° Los pagarés en favor de la Hacienda pública por compra de bienes nacionales.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1861.

Con el fin de regularizar los pagos de bienes desamortizados, y evitar el estravío de los espedientes de subastas, se manda observar las disposiciones siguientes:

«1.ª Los jueces de primera instancia, en el mismo dia en que reciban espedientes de subastas, acusarán su recibo á los comisionados de ventas, y dispondrán su entrega á los escribanos respectivos, quedándose con nota de ellos.

2.ª Las notificaciones á los rematantes para el pago de las fincas se harán con arreglo á derecho, dentro de los diez dias siguientes al en que se reciban los espedientes, si los interesados residieran en los mismos pueblos donde se hallan los juzgados, ó quince cuando se hallen en distintos pueblos y hayan de librarse exhortos.

3.ª En el mismo dia en que tenga lugar la notificacion, ó en el que se reciban cumplimentados los exhortos, se darán por los escribanos los avisos á los comisionados de ventas, como se determina en el art. 146 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, repitiéndolos siempre que por haber sufrido estravío fueran reclamados de nuevo por aquellos funcionarios.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE FEBRERO DE 1862.

Se resuelve, que los comisionados de ventas pueden continuar delegando sus facultades en los jueces de paz y alcaldes de los pueblos en que radiquen las fincas, para dar posesion á los compradores de fincas enajenadas por el Estado.

REAL ÓRDEN DE 3 DE SETIEMBRE DE 1862.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del espediente instruido en esa Direccion general á consecuencia de las consultas elevadas por varios administradores del ramo y jueces de primera instancia acerca de las dudas que ofrece la inteligencia de los arts. 164, 165 y 166 de la Real instruccion de 31 de Mayo de 1855 y Real órden de 22 de

(1) Véanse las Reales órdenes de 24 de Diciembre de 1862 y 14 de Noviembre de 1863 y la órden del Poder ejecutivo de 7 de Abril de 1869.
(2) V. la Real órden de 3 de Setiembre de 1862.

Mayo de 1861, sobre la forma en que deben verificarse las subastas de las fincas declaradas en quiebra por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero; y conformándose S. M. con lo propuesto por V. I. é informado por el Consejo de Estado en pleno, se ha dignado mandar que en la aplicacion de los espresados artículos y Real órden se observen las reglas siguientes (1):

1.ª Cuando los compradores de bienes nacionales no satisfagan á su respectivo vencimiento y despues de los dos avisos prevenidos en el art. 164 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 (2), cualquiera de los pagarés que tengan suscritos, se espedirá por el oficial primero interventor de la administracion de propiedades y derechos del Estado certificacion del importe del débito con espresion de las fechas en que se hayan pasado las cédulas de invitacion, consignando, con referencia á los libros de cuentas corrientes por ventas, no haberse ingresado en tesorería el importe del pagaré. Esta certificacion será autorizada con el *visto bueno* del administrador.

2.ª En su vista el administrador principal de propiedades espedirá el correspondiente despacho de apremio contra el deudor en la misma forma que se verifica por los débitos por rentas, nombrando un comisionado con las dietas siguientes: hasta 500 rs. de 8 rs. vn. diarios; de 501 á 1,000, 12; de 1,001 á 3,000, 16; de 3,001 á 5,000, 20; de 5,001 en adelante, 24.

3.ª El comisionado notificará al deudor, y si éste no verificare el pago en el término del tercer dia, procederá al embargo de bienes suficientes á cubrir el capital que conste en la certificacion y las costas.

4.ª En este embargo se observará el órden prevenido en las leyes de Enjuiciamiento civil y en el art. 164 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, es decir, que en primer término se embargarán el metálico, alhajas, granos, caldos y demás efectos muebles de mas fácil é inmediata realizacion. Si estos no bastasen, se estenderá el embargo á los bienes inmuebles que posea el deudor y no estén afectos á obligaciones de desamortizacion. A falta tambien de estos se procederá al embargo de la finca de que proceda el débito.

5.ª Hecho el embargo de bienes muebles suficientes para el reintegro á la Hacienda, el comisionado procederá á su venta, observándose las formalidades que están marcadas por punto general.

6.ª Si hubiera necesidad de vender bienes inmuebles libres de obligaciones de bienes nacionales, se verificará asimismo con sujecion á las reglas y bajo las mismas condiciones establecidas para los demás débitos á favor del Estado.

7.ª Si el deudor no poseyera mas bienes que la finca ó fincas de que procediera el débito, se incautará de ellas la administracion de propiedades y derechos del Estado y dará cuenta al gobernador de la provincia para que declare la quiebra.

8.ª Dicha autoridad lo acordará asi, disponiendo que por la administracion espresada se redacte y remita el anuncio para la subasta al juez de Hacienda de la provincia, ante el cual debe tener esta efecto con arreglo al art. 166 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

9.ª Los anuncios contendrán las condiciones generales que están prevenidas para la venta de los bienes del Estado, y además las siguientes (1):

Primera. Que la subasta será simultánea en el mismo dia y hora en el juzgado de Hacienda de la provincia, y en el del partido donde radique la finca, á cuyo efecto, el primero exhortará al segundo. Si el tipo de la subasta escediere de 20,000 reales, se celebrará otro remate ante el juez de Hacienda de Madrid.

Segunda. Que el tipo de la subasta será el mayor que resulte entre la tasacion, la capitalizacion ó el débito por el que se proceda á la venta.

Tercera. Que el rematante satisfará al contado la cantidad que se halle adeudando el comprador primitivo, y el resto hasta lo que ascienda el remate, lo verificará en tantos plazos iguales, con el intervalo de un año, cuantos sean los pagarés que falten por realizar de la primera venta.

Y cuarta. Que serán de cuenta del quebrado los gastos de la nueva subasta, y del segundo comprador los de escritura y toma de posesion.

10. Verificadas las subastas, se reunirán los testimonios en el juzgado de Hacienda, el cual aprobará la venta adjudicando la finca al mejor postor, y pasará testimonio al gobernador para que se formalice el pago por la administracion de propiedades.

11. Este tendrá lugar segun las condiciones del anuncio, satisfaciendo el comprador al contado el importe del débito, y suscribiendo los oportunos pagarés de los plazos en que esté obligado á satisfacer la diferencia del remate.

12. En vista de la carta de pago, el escribano actuario, que será el de Hacienda, estenderá al comprador la competente escritura. Tanto esta, como los derechos de subasta y demás actuaciones, se ajustarán á las fórmulas y aranceles que rijan para las trasmisiones de dominio entre particulares.

13. La administracion de propiedades y derechos del Estado con presencia del testimonio de la aprobacion del remate formará la oportuna li-

(1) Véase el decreto de 23 de Junio de 1870.
(2) Véase la Real órden de 25 de Enero de 1867.

(1) Véase la órden del Regente del reino de 7 de Noviembre de 1869.

quidacion para exigir al anterior comprador la diferencia entre aquel y el primitivo, en la forma establecida en la Real órden de 22 de Mayo de este año (debe ser el de 1861), y cargándole además los gastos del espediente de apremio y derechos del de subasta, cuyo importe, si no se satisfaciese al contado, se le cobrará por la vía gubernativa de apremio. Si de la liquidacion resultase una diferencia á favor del primitivo rematante, le será entregada por el Tesoro.

14. Todo comprador quebrado tendrá derecho á que se suspendan los procedimientos contra sus bienes y contra la finca objeto de la quiebra si satisfaciese los pagarés que tenga en descubierto, y los gastos ocasionados en aquellos, en conformidad á lo prevenido por el art. 162 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y en las leyes y reglamentos para el enjuiciamiento civil.

Y 15. Las dietas y gastos del espediente gubernativo, y del judicial, serán abonados por el Tesoro, sin perjuicio del reintegro que el mismo se haga cuando realice la liquidacion de diferencias del vendedor quebrado.

Y teniendo presente además que á consecuencia de los diversos casos en que se hallan las ventas de dicha clase ejecutadas hasta el dia, por efecto de la distinta inteligencia que en cada provincia se ha dado á los citados artículos y Real órden, se halla en suspenso la aprobacion de los remates respectivos;

S. M. se ha dignado igualmente mandar, que todas aquellas ventas que se hubiesen ya adjudicado, y de cuyas fincas hubiesen tomado posesion los compradores, sean respetadas y consolidadas en los términos en que se hayan verificado: que se aprueben y adjudiquen las que se hubiesen realizado bajo las bases que ahora se establecen; y que se anulen los remates de las que no lo hubiesen sido con arreglo á las nuevas prescripciones, á fin de que se anuncien nuevamente á subasta con sujecion á ellas.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE SETIEMBRE DE 1862.

Se declara, que los investigadores de bienes nacionales pueden hacer postura en todas las subastas de fincas desamortizables, sin restriccion alguna, conforme á lo prescrito en el párrafo 1.°, artículo 132 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE 9 DE OCTUBRE DE 1862.

Dispone lo siguiente:

«1.° Que cuando se anuncie en venta una heredad comprensiva de varias tierras no contiguas, pero que estén situadas en el mismo término jurisdiccional, se espresen exactamente sus cabidas y linderos especiales, sin perjuicio de los generales de toda la finca.

2.° Que cuando se considere conveniente agrupar en una sola subasta diferentes prédios que no pertenezcan á una sola heredad, sin perjuicio de marcar exactamente toda su estension y linderos, se instruya el espediente que previene la Real órden de 10 de Febrero de 1856, que dió nueva redaccion al art. 111 de la Real instruccion de 31 de Mayo de 1855, verificándose lo mismo cuando se trate de dividir en suertes una finca de mayor cuantía; y en este caso se observará además la circular de esta Direccion de 19 de Noviembre de 1858 y la Real órden de 22 de Julio de 1859, remitiendo los espedientes á este centro para que recaiga la resolucion de la Junta superior de ventas.»

REAL ÓRDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1862.

Resolviendo un espediente promovido por el Duque de Alba, se hacen las siguientes declaraciones de aplicacion general:

«1.° Que se reconozca y tenga por subsistente la propiedad del dominio directo, que reclama y ha probado poseer el Duque de Alba, sobre las tierras de los pueblos del partido de Granadilla, de que se trata en este espediente.

2.° Que son nulas las ventas de las fincas de dicha procedencia, en que se hayan enajenado juntos el dominio útil y el directo, sin la debida espresion de que el primero era solo el que pertenecia á la corporacion mediante el cánon que por él satisfacia al señor directo.

3.° Que al anunciarse nuevamente la subasta de las fincas espresadas, y de las que con iguales cargas se enagenen en lo sucesivo, se haga solo de dicho dominio útil, con espresion de que al comprador se le rebajará del precio del remate el capital del cánon ó renta anual, en los términos prevenidos en los artículos 142 y 143 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, segun los casos, para que quede de su cargo en lo sucesivo el pago de dicha renta ó cánon, segun lo dispuesto en el art. 29 de la ley de 11 de Julio de 1856.

4.° Que el laudemio en los enfitéusis será de cuenta del comprador satisfacerlo, siempre que el dominio directo de la finca vendida no pertenezca al Estado ó á cualquiera de las corporaciones cuyos bienes están declarados en venta por las leyes desamortizadoras, como ya se declaró en Real órden de 29 de mayo de 1861.

5.° Que el derecho de tanteo y retracto que constituyen parte del dominio directo, no pueden reconocerse en las ventas que se verifican en virtud de las leyes de desamortizacion (1); pero podrá hacerse uso de ellos en las enajenaciones ó trasmisiones de dominio que tengan lugar en lo sucesivo.

(1) V. el art. 9 de la ley de 15 de Junio de 1864.

6.° Que por consiguiente, no procede en la enfitéusis la subrogacion de responsabilidad de paga de que trata el art. 30 de la ley de 11 de Julio de 1856, porque no hay hipoteca mancomunada, una vez que cada finca responde solo de la carga que sobre ella gravita, conforme lo dispone para las especiales sobre finca determinada el artículo 29 de la propia ley.

Y 7.° Que en estas disposiciones están comprendidos todos los casos en que el censatario posea solo el dominio útil, y el directo el censualista.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE OCTUBRE DE 1862.

Se resuelve, que se modifiquen los arts. 147, 150, 151 y 152 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 en los términos siguientes:

«Art. 147. Antes de realizar el pago, si el valor de la finca ó fincas adjudicadas consistiese en arbolados ó montes, en una parte que esceda del importe del primer plazo de la adjudicacion que debe realizar al contado, segun la diferente procedencia de las fincas, además de quedar responsable al completo pago en que hayan sido rematadas, presentará el comprador fianza equivalente al valor que resulte tener el arbolado, prorateando entre éste y el del suelo el total importe del remate, segun el que hayan tenido respectivamente en tasacion, en títulos de la deuda diferida ó consolidada del 3 por 100 al precio de la cotizacion de la Bolsa, y en acciones de carreteras por su valor nominal.

Art. 150. En el segundo caso, ó sea cuando la fianza consista en los efectos públicos antes designados, el comprador presentará en la tesorería de Hacienda pública, con doble factura y espresion del objeto, los suficientes á cubrir el total valor del arbolado, á fin de que por dicha oficina se remitan á la Direccion de la Caja general de depósitos, que espedirá la correspondiente carta de pago como depósito necesario impuesto por el interesado. Este documento se remitirá á la tesorería de que procedan los valores, para que la administracion le una al espediente de su referencia, ó tomando nota de él lo entregue al comprador.

Art. 151. No se alzará la fianza hasta que la Hacienda reciba el total importe del valor del arbolado por el cual fué aquella prestada, y un plazo mas de los pendientes si la finca se compone de suelo y arbolado, ó hasta que estén pagados todos los plazos, si solo forma su valor el arbolado.

Art. 152. Por el mismo órden no se exigirá la espresada fianza cuando los rematantes de las fincas de aquella especie anticipen en su totalidad la cantidad que resulte corresponder al valor del arbolado, segun la prorata del remate de que habla el art. 147, y un plazo más como se espresa en el anterior, ó el total valor de la finca si solo se compone de arbolado.»

REAL ÓRDEN DE 24 DE DICIEMBRE DE 1862.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de la consulta que V. I. elevó á este Ministerio, proponiendo varias disposiciones con objeto de remediar los abusos á que están dando lugar las indemnizaciones por desperfectos ocurridos en las fincas con posterioridad á su tasacion, ó por falta de cabida ó arbolado en las mismas.

Y considerando que, respecto de las primeras, están suficientemente garantidos los intereses del Estado con el art. 157 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855:

Considerando que siendo de idéntica naturaleza las indemnizaciones por falta de cabida ó arbolado, deben regirse por unas mismas disposiciones:

Considerando que con arreglo á la Real órden de 10 de Abril de 1861, es obligatoria la indemnizacion cuando la falta de terreno no escede de la mitad de la cabida dada á la finca en el anuncio de subasta:

Considerando que hay muchos casos en que no llegando la falta á la mitad de la cabida, y siendo por consiguiente indemnizable, asciende la indemnizacion á mucho mas de la mitad del valor en que fué rematado el prédio, porque la parte que se segrega suele estar roturada y plantada de viñedo ó arbolado:

Considerando que los productos de las ventas constituyen una parte del haber del Tesoro, y que por consecuencia no debe concederse indemnizacion alguna que los disminuya sin conocimiento de este Ministerio;

S. M. visto el parecer de la Asesoría general y del Consejo de Estado se ha servido resolver, que tanto en los casos de desperfectos ocurridos en las fincas despues de tasadas y antes de que tome posesion de ellas el comprador, como en los de falta de cabida ó arbolado, ó cualquiera otro, sea potestativo el que el Estado opte entre la indemnizacion ó la nulidad; y que una vez instruidos los espedientes que acrediten la legitimidad de la reclamacion, y dada cuenta de ellos á la Junta superior de ventas, se eleve su acuerdo á la aprobacion de este Ministerio.»

REAL ÓRDEN DE 18 DE MAYO DE 1863.

Se dispone que se entiendan modificados la Real órden de 13 de Julio de 1855, y el art. 196 de la instruccion de 31 de Mayo del propio año, en el sentido de que, para la determinacion de mayor ó menor cuantía en las fincas, respecto al pago de derechos de subasta, se atienda al remate, y no á su tasacion ó capitalizacion; quedando sin embargo subsistente este último tipo para la graduacion

de los derechos de tarifa, que hayan de abonarse, segun el artículo 192 de la citada instruccion.

REAL ÓRDEN DE 27 DE MAYO DE 1863.

En vista de una consulta sobre la autoridad judicial ó gubernativa que debe disponer las actuaciones que preceden al otorgamiento de las fianzas por arbolado de fincas vendidas, se resuelve, «que el juez de la subasta en que se haya presentado el mejor postor, ante el escribano actuario, es el que debe disponer aquellas diligencias, por sí mismo cuando las fincas radiquen en el pueblo de su residencia, y por los alcaldes ó jueces respectivos si se hallan en otros diferentes; lo cual no se opone á que las escrituras se estiendan por los escribanos de Hacienda, segun lo previene el artículo 148 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

REAL ÓRDEN DE 8 DE JUNIO DE 1863.

Se resuelve que, además de los efectos públicos designados en el art. 147 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, se admitan tambien en fianza del arbolado de las fincas vendidas las acciones del Canal de Isabel II y las de ferro-carriles, por todo su valor nominal.

REAL ÓRDEN DE 15 DE JUNIO DE 1863.

En vista del espediente promido por D. Antonio Coca en solicitud de que se le admita el pago del primer plazo de la cantidad en que remató en el año de 1844 un olivar procedente del clero, que fué entregado á éste en 1845, y devuelto á la Hacienda á consecuencia de la ley de 1.° de Mayo de 1855: considerando que por la Real órden de 18 de Enero de 1853 «se manda admitir el pago á los compradores de fincas, cuyos remates se han declarado en quiebra por falta de pago de alguno ó algunos de los plazos vencidos, siempre que lo verifiquen antes de que tenga efecto la nueva subasta por disposicion de los prelados diocesanos: considerando que por lo que se desprende de la letra y espíritu de esta disposicion, solo se ha querido comprender en ella á aquellos compradores que, habiendo satisfecho algun plazo, fueron sin embargo declarados en quiebra por faltarles alguno ó algunos de los ya vencidos; pero nunca á los que no han llegado á realizar siquiera el primero;» se desestima dicha pretension, y se declara que esta resolucion ha de servir de jurisprudencia para los casos análogos que ocurran en lo sucesivo.

REAL ÓRDEN DE 10 DE SETIEMBRE DE 1863.

Se confirma lo prevenido en la Real órden de 23 de Julio de 1860 en cuanto á que se admitan solo á descuento los pagarés que pueblan anticiparse por uno ó mas años completos; y se declara al mismo tiempo que los compradores que con estas circunstancias realicen el anticipo, tienen derecho al abono del interés que les corresponda desde el dia en que se formalice en tesorería el ingreso del importe de los plazos.

REAL ÓRDEN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1863.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del espediente instruido en esa Direccion general con objeto de que se dicte una resolucion legal para los casos en que, mas ó menos tiempo despues de adjudicada una finca y posesionado de ella el comprador, se presenta reclamacion contra su venta, por tener dentro de los linderos designados en el anuncio de subasta una cabida mucho mayor que la que consignaron los peritos al tasarla; y

Vista la Real órden de 10 de Abril de 1861, que declaró que los bienes desamortizables no deben entenderse vendidos como cuerpos ciertos; sino por la cabida que realmente tengan:

Visto el Real decreto de 27 de Enero último (1), que dispone que aquella resolucion no es aplicable á las ventas verificadas con anterioridad á su fecha, las cuales deben entenderse hechas como cuerpos ciertos, siempre que en los anuncios se hubiesen fijado linderos determinados:

Vista la Real órden de 2 de Diciembre del año último, que determinó que en los casos en que los compradores soliciten indemnizacion por falta de cabida ó arbolado, ó por cualquiera otra causa, sea potestativo en el Estado optar entre la indemnizacion ó la nulidad de la venta.

Considerando que reconocido el derecho que los rematantes tienen á que se les indemnice ó se anule el contrato cuando hay falta de cabida en las fincas enajenadas con posterioridad al 10 de Abril de 1861, debe reconocerse igual derecho en favor del Estado en los casos en que resultase esceso de cabida:

Considerando que la rigorosa aplicacion de la expresada Real órden de 10 de Abril de 1861, podria limitar el número de los postores por la inseguridad en que quedarian los rematantes si no se fijase un plazo para intentar las reclamaciones, y hubiese de regir el que marca el derecho comun para la prescripcion de acciones civiles:

Considerando que la designacion pericial de la cuantía de las indemnizaciones puede dar lugar á numerosos fraudes, que en muchos casos no po-

(1) Es un *Real decreto-sentencia* del Consejo de Estado, por cuya circunstancia no corresponde insertarlo en la parte legislativa; pero podrá verse en el §. 2.° de la sec. IX de la parte doctrinal.

rio evitar la vigilancia más activa de la Administracion:

Considerando que es tambien muy conveniente fijar con exactitud el límite del error en mas ó en menos de la cabida, que puede anular el contrato;

S. M., conformándose con el dictámen de la Asesoría general de este Ministerio y Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver que en todos los anuncios de subastas que se publiquen desde esta fecha se esprese, que si dentro del término de los dos años siguientes á la adjudicacion de la finca al rematante, se entablase reclamacion sobre esceso ó falta de cabida, y del espediente resultase que dicha falta ó esceso iguala á la quinta parte de la espresada en el anuncio, será nula la venta, quedando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemnizacion el Estado ni el comprador, si la falta ó esceso no llegase á dicha quinta parte.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 9 DE ENERO DE 1864.

Se dispone: «que tan luego como se conozcan por las oficinas del ramo de las provincias las órdenes que disponen la nulidad de la venta de alguna finca por cualquier concepto, debe ponerse en posesion de la misma á la corporacion de donde proceda, respetando por término del año corriente, en consonancia con el art. 158 de la instruccion de 1.° de Mayo de 1855, el arrendamiento ó arrendamientos que hubiese formalizado el comprador antes de la declaracion de nulidad de la venta del prédio; y encargar al comprador que hasta la espresada declaracion de nulidad lo hubiese estado disfrutando, que presente cuenta justificada de productos y gastos de dicho prédio, correspondientes al tiempo que lo hubiese poseido, la cual deberá venir censurada por la administracion y por la corporacion propietaria á este centro directivo para su aprobacion, y en su caso disponer los abonos procedentes, con la bonificacion que competa segun la Real órden de 27 de Julio de 1861.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE ABRIL DE 1864.

Se resuelve, que cuando la cesion de una finca de bienes nacionales no haya tenido efecto en el acto del remate ó en los dos dias siguientes á la notificacion de haber sido adjudicada, sino despues de estos plazos, ese convenio es un contrato de compra-venta entre particulares, que no puede considerarse como cesion del remate, ni producir los efectos de tal, y de consiguiente la Hacienda solo puede repetir el pago de los plazos vencidos contra el primitivo comprador, que firmó los pagarés, y á cuyo favor se otorgó la escritura (1).

REAL ÓRDEN DE 14 DE JUNIO DE 1864.

Se acuerda, «que se autoricen las cesiones de parte de una finca despues de rematada, teniendo presente para verificarlo lo prevenido en las instrucciones publicadas para el cumplimiento de las leyes de desamortizacion, y especialmente la Real órden de 18 de Febrero de 1860, y con la condicion de que todas las porciones en que se haya subdividido la finca responderán mancomunadamente á la Hacienda, como hipoteca del total valor en que fué rematada la propiedad sin dividir.»

REAL DECRETO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1864.

«Para ocurrir á los inconvenientes á que ha dado lugar mi Real decreto de 6 de Noviembre de 1863, por el que se dictaron reglas para la *inscripcion en los Registros de la propiedad* de los bienes inmuebles y derechos reales que poseen ó administran el Estado y las corporaciones civiles ó eclesiásticas, de conformidad con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el de Hacienda, Vengo en decretar:

Artículo 1.° Los bienes inmuebles y los derechos reales que poseen ó administran el Estado y las corporaciones civiles, y se hallan esceptuados ó deban esceptuarse de la venta, con arreglo á las leyes de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, se inscribirán desde luego en los registros de la propiedad de los partidos en que radiquen.

Art. 2.° Por los Ministerios de que dependan las corporaciones, las oficinas ó las personas que disfruten ó á cuyo cargo estén los bienes espresados en el artículo anterior, se comunicarán á las mismas las órdenes oportunas á fin de que reclamen las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán los documentos y noticias que para ello sean necesarias

Art. 3.° Se esceptúan de la inscripcion ordenada en los anteriores artículos:

1.° Los bienes que pertenecen tan solo al dominio eminente del Estado, y cuyo uso es de todos, como las riberas del mar, los rios y sus márgenes, las carreteras y caminos de todas clases, con esclusion de los de hierro, las calles, plazas, paseos públicos y egidos de los pueblos, siempre que no sean terrenos de aprovechamiento comun de los vecinos; las murallas de las ciudades y plazas, los puertos y radas y cualesquiera otros bienes análogos de uso comun y general.

(1) Véase la R. órden de 3 de enero de 1866.

2.° Los templos actualmente destinados al culto.

Art. 4.° Si alguno ó alguna parte de los bienes comprendidos en el artículo anterior cambiare de destino entrando en el dominio privado del Estado, de las provincias, de los pueblos ó de los establecimientos públicos, se llevará á efecto su inscripcion desde luego, si hubieren de continuar amortizados; y con arreglo á los artículos 14 y siguientes, si deben enajenarse.

Art. 5.° Siempre que exista título escrito de la propiedad del Estado ó de la corporacion en los bienes que deben ser inscritos con arreglo al artículo 1.°, se presentará en el registro respectivo y se exigirá en su virtud una inscripcion de dominio á favor del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujecion á las reglas establecidas para la de los particulares.

Art. 6.° Cuando no exista título escrito de la propiedad de dichos bienes se pedirá una inscripcion de posesion, la cual se verificará á favor del Estado, si éste los poseyere como propios, ó á favor de la corporacion que actualmente los poseyere, ó los hubiera poseido hasta que la Administracion los tomó bajo su custodia.

Art. 7.° Tanto en la inscripcion de dominio como en la de posesion, se hará siempre constar la procedencia inmediata y el estado actual de la posesion de los bienes inscritos.

Art. 8.° Para llevar á efecto la inscripcion de posesion, el jefe de la dependencia á cuyo cargo esté la administracion ó custodia de las fincas que hayan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública ó tenga facultad de certificar, expedirá por duplicado una certificacion en que, refiriéndose á los inventarios ó á los documentos oficiales que obren en su poder, haga constar:

1.° La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos, denominacion y número en su caso, y cargas reales de la finca ó derecho que se trate de inscribir.

2.° La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de que se trate, y la naturaleza, situacion, linderos, nombre y número en su caso de la finca, sobre la cual estuviere aquel impuesto.

3.° El nombre de la persona ó corporacion de quien se hubiere adquirido el inmueble ó derecho, cuando constare.

4.° El tiempo que lleve de posesion el Estado, provincia, pueblo ó establecimiento, si pudiera fijarse con exactitud ó aproximadamente.

5.° El servicio público ú objeto á que estuviere destinada la finca.

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se espresará así en la certificacion, mencionando las que sean.

Estas certificaciones se estenderán en papel del sello de oficio, quedando su minuta rubricada en el expediente respectivo.

Art. 9.° Cuando el funcionario, á cuyo cargo estuviere la administracion de los bienes, no ejerza autoridad pública ni facultad para certificar, se espedirá la certificacion á que se refiere el artículo anterior por el mas inmediato de sus superiores gerárquicos que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables.

Art. 10. Los dos ejemplares de la certificacion espresada en el art. 8.° se remitirán desde luego al registrador correspondiente por el funcionario que la espida, solicitando la inscripcion de posesion que proceda.

Art. 11. Si el registrador advirtiere en la certificacion la falta de algun requisito indispensable para la inscripcion, segun el art. 8.°, devolverá ambos ejemplares, advirtiendo dicha falta, despues de estender el asiento de presentacion y sin tomar anotacion preventiva. En este caso se estenderán nuevas certificaciones en que se subsane la falta advertida, ó se haga constar la insuficiencia de los datos necesarios para subsanarla.

Art. 12. Verificada la inscripcion de dominio, devolverán los registradores los títulos para ella presentados á las oficinas ó funcionarios de que procedan. Cuando se inscriba la posesion, conservarán los registradores en su poder uno de los dos ejemplares de la certificacion, y devolverán el otro con la nota correspondiente de *Registrado* etc.

Art. 13. En la misma forma se inscribirán los bienes que posea el clero ó se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las certificaciones de posesion que para ello fueren necesarias, se espedirán por los diocesanos respectivos.

Art. 14. Los bienes inmuebles ó derechos reales que posean ó administren el Estado ó las corporaciones civiles ó eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo á las leyes de desamortizacion, no se inscribirán en los registros de la propiedad hasta que llegue el caso de su venta ó redencion á favor de los particulares, aunque entretanto se trasfiera al Estado la propiedad de ellos por consecuencia de la permutacion acordada con la Santa Sede.

Art. 15. Cuando haya de ponerse en venta alguno de los bienes ó de redimirse alguno de los derechos comprendidos en el artículo anterior, el administrador de propiedades y derechos del Estado en cuya provincia radiquen, buscará y unirá al espediente de venta ó redencion los títulos de dominio de dichos bienes.

Si no existiesen ó no pudiesen ser hallados dichos títulos, se hará esto constar en el referido espediente, y se espedirá por el mismo administrador la certificacion duplicada á que se refiere el artículo 8.°, pidiéndose y estendiéndose en virtud

de ella una inscripcion de posesion antes del dia señalado para el remate, ó antes de otorgarse la redencion, si se tratare de algun censo, y procediéndose en todo caso del modo dispuesto en los anteriores artículos.

Art. 16. Al otorgarse la escritura de venta ó redencion, se entregarán al comprador ó redimente los títulos de propiedad, si los hubiere, ó el duplicado de la certificacion de posesion que en otro caso deberá haber devuelto el registrador, segun lo prevenido en el art. 12.

Art. 17. El Estado abonará á los registradores los honorarios de las inscripciones que mande estender; pero cuando se refieran á fincas que se enajenen, se incluirá su importe en los gastos del espediente de subasta que deben abonar los compradores.

Art. 18. Los que desde el dia 1.° de Enero de 1863 hayan adquirido del Estado bienes desamortizados ó redimido censos, tendrán derecho á exigir los títulos de los mismos, ó en su defecto la certificacion de posesion espresada en el art. 8.° con la nota del registrador de haberse verificado la inscripcion correspondiente.

Para este efecto, los administradores de propiedades y derechos del Estado mandarán inscribir desde luego todos los bienes que se hallen en este caso, remitiendo los títulos de dominio, si los tuvieren, ó las certificaciones de posesion.

Art. 19. Los compradores de bienes desamortizados y los redimentes de censos tambien desamortizados, que adquirieron su derecho antes del espresado dia 1.° de Enero de 1863, podrán inscribirlo á su favor presentando tan solo la escritura de venta ó redencion, ya sea esta de fecha anterior, ya posterior á dicho dia, en que empezó á regir la Ley Hipotecaria.

Art. 20. Cuando el Estado ó las corporaciones civiles adquieran algun inmueble ó derecho real, los gobernadores de las provincias ó los directores generales de los ramos bajo cuya dependencia ha de administrarse ó poseerse, cuidarán de que se recojan los títulos de propiedad, si los hubiere, y de que en todo caso se verifique la inscripcion que sea posible, bien de dominio, ó bien de mera posesion.

Art. 21. Si despues de enajenada una finca ó de redimido un censo y de otorgada la correspondiente escritura, se rescindiere ó anulare por resolucion gubernativa la venta ó redencion, se pedirá una anotacion preventiva de esta resolucion, presentando un certificado de ella por duplicado, en el cual se harán constar además las circunstancias necesarias para la anotacion, segun el art. 72 de la Ley Hipotecaria.

Si trascurriese el término en que, segun las disposiciones vigentes, pueden los interesados reclamar contra estas resoluciones por la vía contenciosa sin hacerse tales reclamaciones, el Director del ramo á que corresponda la finca ó derecho procurará su inscripcion de dominio á favor del Estado ó de la corporacion á que pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la cancelacion de la inscripcion del contrato anulado solamente, si dicha finca ó derecho debiere enagenarse con arreglo á las leyes.

Art. 25. Cuando sea declarado en quiebra el comprador de una finca ó derecho por no haber pagado su precio en los plazos correspondientes, se anotará preventivamente esta declaracion, procediéndose para ello del modo establecido en el artículo antecedente.

Art. 26. Este Real decreto se comunicará por el Ministro de Gracia y Justicia á los demás Ministerios, los cuales adoptarán á la vez las disposiciones necesarias para su cumplimiento en la parte que á cada uno concierna.

Art. 27. Queda sustituido por el presente el mencionado Real decreto de 6 de noviembre de 1863, y derogadas las demás disposiciones anteriormente dictadas para la inscripcion de los bienes del Estado.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 7 DE DICIEMBRE DE 1864.

En vista de la paralizacion que sufre el pago de los primeros plazos por la lentitud con que los escribanos actuarios notifican las adjudicaciones á los compradores de bienes nacionales, se previene que dichas notificaciones deben hacerse en el preciso término de 15 dias, comunicándose en el de tres al comisionado de ventas de la provincia la fecha en que se hubieren hecho, á fin de que se proceda á la declaracion de quiebra, si en el plazo marcado por la instruccion no se han realizado los pagos del primer plazo; en la inteligencia de que se exigirá á los escribanos la responsabilidad que proceda, y para evitarla darán conocimiento, en caso de no poder hacer la notificacion, de los motivos que lo impidan (1).

REAL ÓRDEN DE 12 DE ENERO DE 1865.

Se mandó que los interesados que hubieren rematado fincas antes de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y no se les hubiere hecho saber la adjudicacion, solicitáran la revalidacion del remate ante el gobernador de la provincia en el término de tres meses, en la inteligencia de que, trascurridos, se entenderia que renunciaban su derecho, y se procederia nuevamente á la venta de las fincas.

REAL DECRETO DE 10 DE JULIO DE 1865.

«Artículo 1.° El derecho de los ayuntamientos

(1) V. la R. órden de 25 de Enero de 1867.

á reclamar las escepciones acerca de terrenos de aprovechamiento comun ó dehesa boyal, consignado en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, solo podrá ejercitarse respecto de las fincas que no hayan sido enajenadas y hasta el acto del remate.

Art. 2.° Esceptúanse de la disposicion del artículo anterior las fincas enajenadas antes de la publicacion de este Real decreto en la *Gaceta*, en el único caso de que los ayuntamientos no hubiesen tenido conocimiento de los actos preliminares de las ventas y de las mismas ventas.

Se entenderá que han tenido este conocimiento siempre que del espediente resulte cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.° Que se ofició al alcalde constitucional del pueblo donde radicaba la finca para que el síndico nombrase el perito tasador.

2.° Que se ofició al alcalde para que dispusiera que en los sitios de costumbre se fijase el correspondiente edicto anunciando el dia y hora del remate.

3.° Que se hizo la insercion y publicacion del anuncio de la subasta en el *Boletin oficial* de la provincia.

Art. 3.° Las resoluciones que el Gobierno adopte declarando no comprendidos en la escepcion señalada en el núm. 9.° del art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 algunos terrenos reclamados como de aprovechamiento comun ó dehesas boyales por los ayuntamientos causarán estado.

Art. 4.° Serán condiciones indispensables para conceder la escepcion por ser los terrenos de aprovechamiento comun:

1.° Que el ayuntamiento reclamante acredite la propiedad que tenga el pueblo en el terreno solicitado.

2.° Que acredite que el aprovechamiento de los terrenos ha sido libre y gratuito para todos los vecinos en los 20 años anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855 y hasta el dia de la peticion, sin interrupcion alguna.

3.° En las dehesas boyales se acreditará además que producen pastos para el ganado de labor, y que toda la dehesa ó la parte de ella que se reclama es necesaria, atendido el número de cabezas destinadas en el pueblo á la agricultura.

Art. 5.° Si acordada por el Gobierno en virtud de las pruebas suministradas por los ayuntamientos la escepcion de una finca como de aprovechamiento comun ó dehesa boyal, apareciesen despues nuevos datos de los cuales resulten que no concurrian en ella las condiciones señaladas en el artículo anterior, se procederá á la revision del espediente; y oida la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, podrá acordarse la venta de la finca.

Art. 6.° A los poseedores de suertes de terrenos baldíos, realengos, comunes, propios y arbitrios, comprendidos en la ley de 6 de Mayo de 1855, que no se hubiesen provisto del título de adquisicion con arreglo á la espresada ley, se les concede el plazo improrogable de seis meses desde la publicacion de este Real decreto para que lo obtengan; y pasado dicho término se entenderá que han renunciado á su derecho, y se considerarán los terrenos sujetos á la ley del 1.° de Mayo del mismo año.

Art. 7.° Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de desamortizacion solo podrán reclamar, por los desperfectos que con posterioridad á la tasacion sufran las fincas por falta de sus cabidas señaladas ó por cualquiera otra causa justa, en el término improrogable de quince dias desde el dia de la posesion.

La toma de posesion podrá ser gubernativa ó judicial, segun convenga á los compradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe del remate, dejase de tomarla en el término de un mes, se considerará como poseedor para los efectos de este artículo.

Art. 8.° El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios causados por los agentes de la Administracion é independientes de la voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones civiles ó criminales que procedan contra los culpables (1).

Art. 9.° Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administracion antes de entablar en los juzgados de primera instancia demandas contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudicacion.

Pasado este término solo se admitirán en los juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los poseedores, citándose de eviccion á la Administracion (2).

Art. 10. Las incidencias de ventas pendientes de resolucion, se resolverán con arreglo á lo dispuesto en los anteriores artículos.»

REAL ÓRDEN DE 21 DE AGOSTO DE 1865.

«Siendo objeto preferente de la mayor solicitud del Gobierno de S. M. el importante asunto de la desamortizacion, ha fijado su atencion este Ministerio en los muchos bienes de patronatos particulares que existen en las provincias de Madrid, Sevilla y otras del Reino, y que segun parece vienen administrando los respectivos gobernadores, bajo la inmediata vigilancia del digno cargo de V. E. (el Ministro de la Gobernacion, que es

(1) V. la Real órden de 30 de Marzo de 1867.
(2) Véase la circular de 26 de Agosto de 1865.

á quien se dirije esta Real órden.) Tales bienes por su carácter evidentemente benéfico y en poder de manos muertas, deben considerarse comprendidos en el artículo 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, pues si alguna duda pudo ofrecer su aplicacion en esta parte, quedó resuelta en pró de la desamortizacion por el Real decreto (sentencia del Consejo de Estado) de 14 de Enero del año próximo pasado, cuya doctrina por él establecida ha servido despues de fundamento para que ese mismo Ministerio declarase enajenables los bienes de patronatos ó instituciones análogas. Y á fin de que por más tiempo no se demore la venta de todos los de que se trata, la Reina (q. D. g.) se ha servido resolver me dirija á V. E., como lo verifico, para que ordene á los gobernadores que con la mayor eficacia dispongan la formacion y remesa á las oficinas del ramo de una relacion de todos aquellos que bajo su administracion ó tutela existan en su provincia, con objeto de que se proceda á su enajenacion segun las disposiciones vigentes, y que en su dia se emitan las equivalentes inscripciones, con cuya renta ha de atenderse al objeto con que se fundaran dichos patronatos.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 26 DE AGOSTO DE 1865.

«13. Los artículos desde el 7.° al 9.° inclusive del mismo Real decreto (*el que precede de 10 de Julio del propio año*) se insertarán como condiciones generales para las subastas en los anuncios de ventas que se publiquen en adelante.»

REAL ÓRDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1865.

Resolviendo un caso particular se declaró, que no se suspenda la venta de fincas, cuya escepcion por ser de aprovechamiento comun ó de servicio público se haya pedido oportunamente, aun cuando se hallase pendiente ante el Consejo de Estado recurso contencioso contra la Real órden que denegó la escepcion de la venta (1). Se fundó esta resolucion, en que «toda Real órden es *ejecutiva*, no obstante el recurso contencioso que intenten contra ella los que puedan creerse perjudicados,» y en que esta doctrina, sancionada en muchos casos por el Consejo de Estado, «es de tal modo inconcusa, que sin ella se veria embarazada á cada paso por la oposicion de los particulares la accion administrativa.»

REAL ÓRDEN DE 17 DE FEBRERO DE 1866.

Se dispone, «que los escribanos se ajusten en el otorgamiento de las escrituras de redencion de censos y venta de fincas de bienes nacionales á los modelos que se les tienen facilitados, autorizándolos en aquellos casos en que no puedan insertar todo el contesto en los impresos actuales, á que manuscriban algun pliego adicional, exigiendo por este el aumento de gasto que cause únicamente el trabajo de amanuense (1).»

REAL ÓRDEN DE 30 DE ABRIL DE 1866.

Se declara como regla general, «que el plazo de cinco años para disfrutar la exencion de derechos de hipotecas, que establece el art. 24 de la ley de 1.° de Mayo de 1855, debe contarse desde el dia de la adjudicacion de la finca, como en él se previene; pero descontando, en las que fueron adjudicadas antes del Real decreto de suspension de ventas de bienes del Estado de 14 de Octubre de 1856 y que se comprendieron en sus efectos, todo el tiempo que respecto á la venta de estas fincas durara aquella suspension, desde que esta tuvo lugar hasta que fuese alzada, en cada caso, por órden de la Direccion del ramo.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE JUNIO DE 1866.

En vista de la necesidad de modificar el art. 4.° de la Real órden de 3 de Mayo de 1860, que previene los casos en que deben hacerse las subrogaciones de censos impuestos sobre bienes mancomunados de corporaciones civiles, enajenados como libres, imponiendo el gravámen sobre la masa de inscripciones de la Deuda pública espedidas á favor de la misma corporacion, por ser esto incompatible con el art. 108 de la Ley Hipotecaria, que prohibe la hipoteca de tales inscripciones, se resuelve: que para todos los casos en que fuese aplicable el mencionado art. 4.°, se entienda redactado en los términos siguientes:

«A los acreedores de censos que graviten mancomunadamente con hipoteca especial sobre todos ó parte de los bienes de un caudal desamortizado perteneciente á corporaciones civiles, y que haya sido enajenado sin la prevencion de aquellas cargas, acreditada y reconocida la renta que perciban los censualistas, se les entregará una cantidad de títulos del 3 por 100 consolidado, suficiente á producir la misma renta que percibian anteriormente, rebajándose el capital que se entregue de la masa de inscripciones de la Deuda pública que deba recibir la corporacion obligada por el producto de los bienes que formaban la hipoteca del censo.

Y como pudiera convenir á algunos censualistas

(1) Se ha resuelto lo contrario por el art. 4.° de la Real órden de 9 de Marzo de 1868 y por la órden del Poder ejecutivo de 11 de Junio de 1869.

(1) Véanse las órdenes de 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869 y el art. 10 de los aranceles notariales de 1870.

de la misma clase, que tengan aun fincas de las responsables de sus créditos, sin vender, aceptar los efectos de esta disposicion, es la voluntad de S. M. que se haga estensiva á los mismos, como igualmente á los que hayan si lo consignadas sus rentas sobre la masa de inscripciones intransferibles de corporaciones civiles, siempre que unos y otros lo soliciten (1).»

LEY DE 15 DE JUNIO DE 1866.

«Art. 1.° El derecho de redimir los censos y demás cargas permanentes que correspondan al caudal de bienes declarados en estado de venta por las leyes de desamortizacion y gravan la propiedad inmueble, podrá reclamarse hasta el acto de la subasta, debiendo suspenderse el remate si el censatario solicitare la redencion antes de haberse terminado.

Art. 2.° Los tipos de capitalizacion para las redenciones serán los señalados en la ley de 11 de Marzo de 1859.

Art. 4.° No se comprenden en las disposiciones que anteceden las ventas procedentes de los arrendamientos constituidos antes del año de 1800, cuyo plazo de redencion concluyó en 27 de agosto de 1856, segun lo dispuesto en la ley de 27 de Febrero del mismo año.

Art. 6.° Cuatro meses despues de publicada la presente ley, la Administracion procederá á la venta de los censos y cargas que espresa el artículo 1.° Estos censos y cargas, de cualquiera clase que sean, se venderán con el carácter de redimibles y lo serán en todo tiempo al tipo de 3 por 100 (2).

Art. 9.° En las enajenaciones que verifique el Estado de la parte que le corresponda en fincas cuyo dominio se halle dividido, tendrá el derecho de tanteo el condueño; y si fueren varios, el que lo sea de mayor porcion, pasando en caso de no ejercitarlo al inmediato porcionero. Este derecho se reclamará dentro de los nueve dias siguientes al acto del remate ante cualquiera de los juzgados que haya intervenido en la subasta (3).

Art. 10. Los capitales de censos que correspondan á particulares ó corporaciones esceptuadas de la desamortizacion, y graviten sobre fincas sujetas á esta, son y seguirán siendo respetados con arreglo al derecho comun y á las escrituras de imposicion (4).»

REAL ÓRDEN DE 13 DE JULIO DE 1866.

Se resuelve, «que reformándose la regla 8.ª del artículo 15 de la Real órden de 10 de Junio de 1856, se declare que de los acuerdos de la Junta superior de ventas en los espedientes de investigacion, pueden, los que se consideren perjudicados con dichos acuerdos, alzarse de ellos en el término de dos meses á este Ministerio (el de Hacienda), como se verifica en los demás asuntos pertenecientes á bienes nacionales, y de las resoluciones del Ministerio podrá acudirse á la vía contenciosa correspondiente.»

REAL ÓRDEN DE 16 DE AGOSTO DE 1866.

Se resuelve por el Ministerio de Gracia y Justicia, que cuando se trate de inscribir en el registro de la propiedad bienes del Estado con arreglo á lo prescrito en el Real decreto de 11 de Noviembre de 1861, si los administradores de propiedades y derechos del Estado no estiman conveniente entregar los títulos á las personas que por haber adquirido ó tratar de adquirir dichos bienes tengan interés en que se verifique la inscripcion, podrán remitirlos á cualquiera de los subalternos de dichos administradores que residan en el punto del registro, y en su defecto al promotor fiscal del juzgado, á fin de que se ejecute la presentacion y se estienda el asiento con las formalidades establecidas en la ley Hipotecaria y en el reglamento para su ejecucion.»

REAL ÓRDEN DE 18 DE AGOSTO DE 1866.

Se encarga á los gobernadores que activen la enajenacion de todas las propiedades que administra el Estado; que hagan ingrese inmediatamente el importe de los plazos al contado por fincas adjudicadas y el de los pagarés no satisfechos á sus vencimientos; que los espedientes de escepciones reclamadas por los pueblos ó solicitadas con arreglo á la ley se instruyan y terminenen un plazo brevísimo; y que cuando se pida la suspension de una venta ó la no adjudicacion de un remate, se despache el espediente con la mayor brevedad posible, exigiéndose la debida responsabilidad por cualquier retraso injustificado que detenga la venta ó adjudicacion.

REAL ÓRDEN DE 20 DE AGOSTO DE 1866.

Por el Ministerio de Hacienda se manda lo siguiente:

«1.° Que todos los acuerdos que dicten la Junta superior de ventas y esa Direccion (la de propiedades y derechos del Estado) dentro del círculo de sus atribuciones, y no se reclamen en el plazo de 60 dias, contados desde el siguiente al en que administrativamente se notificó el acuerdo á los interesados, causen estado en la vía administrativa

(1) V. la Real órden de 14 de Enero de 1866.
(2) V. la Real órden de 17 de Enero de 1867.
(3) V. la Real órden de 13 de Agosto de 1866.
(4) V. la Real órden de 14 de Enero de 1866.

Y 2.° Que los términos que V. I. señale para ampliar la justificacion de espedientes sometidos á ese centro directivo, se consideren improrogables; debiéndose tener la reclamacion por injustificada cuando se deje trascurrir el plazo sin hacer justificacion alguna, á menos que resultase que causas graves ó insuperables lo impidieron (1).»

REAL ÓRDEN DE 13 DE SETIEMBRE DE 1866.

«Disponiéndose en Real órden de 20 del mes último, que en las fincas desamortizables, en que se han verificado sin resultado las cinco subastas prevenidas por instruccion, se practique una nueva tasacion por otros peritos, y habiendo de producir esta operacion los consiguientes gastos, cuyo pago es conveniente determinar quién ha de hacerlo, la Reina (q. D. g.) se ha dignado resolver, que al anunciarse las fincas que se encuentran en este caso, se fije la condicion de que el pago de los nuevos peritos ha de hacerse por los compradores, con arreglo á las tarifas establecidas, al consignar el primer plazo.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 15 DE SETIEMBRE DE 1866.

Se traslada á los gobernadores de provincia la Real órden de 20 de Agosto de 1866, inserta anteriormente, y para su cumplimiento se hacen por dicha Direccion las prevenciones que siguen:

«Al comunicar á V. S. la Real órden precedente, la Direccion se cree en el caso de hacer algunas indicaciones acerca de su importancia, de la necesidad que existe de que V. S. la haga pública, y de que todos tengan muy presente cuanto en ella se dispone.

Hasta el dia sabe V. S. muy perfectamente que, en la generalidad de los casos, se podian alzar sin plazo determinado para ante el Gobierno las corporaciones y los particulares contra los acuerdos de la Junta superior de ventas y de esta Direccion. Esto producia un mal gravísimo, por que dejaba en incierto, por tiempo ilimitado, los derechos de cuantos con el Estado contratan, y hasta los del Estado mismo.

Los espedientes, con semejante sistema, eran interminables; y el cálculo unas veces, y el descuido otras, podian contribuir á que su resolucion definitiva se dilatase á voluntad de los reclamantes. En lo sucesivo desaparecerá este inconveniente. Todos tienen espedito el derecho para reclamar ante el Gobierno contra los acuerdos de la Junta superior de ventas y de este centro directivo, porque la Administracion no cierra ni quiere cerrar la puerta á las reclamaciones; por el contrario desea que sus actos se esclarezcan y lleven siempre el sello de la mas estricta justicia; pero, como las reclamaciones de alzada se entablen sencilla y fácilmente, bastando una solicitud al Gobierno para que el espediente se eleve á su superior resolucion, no habia razon ni fundamento para dejar de señalar un término, dentro del cual se utilizara aquel derecho, que á nadie se niega ni dificulta. No se trata, pues, de impedir la reclamacion, sino de regularizarla en beneficio de todos. La accion queda espedita, si bien es de necesidad entablarla dentro del plazo de sesenta dias, pasado el cual causará estado el acuerdo de la Junta ó de la Direccion.

Siendo de tal trascendencia el trascurso del espresado plazo, es necesario que el requerimiento ó notificacion administrativa se verifique pronto y se haga constar de una manera indudable. Se necesita la mayor exactitud en este particular para evitar que ni una sola queja se produzca contra la Administracion. A este fin cuidará V. S. muy especialmente, de que tan pronto como se resuelva en definitiva cualquier reclamacion por la Junta superior de ventas ó esta Direccion general, se dé el correspondiente traslado á la corporacion ó particular que la promoviera, exigiendo lo á la autoridad local reclame del interesado el oportuno recibo de la órden, anotando en esta el dia en que le fuese entregada, debiendo firmar un testigo en caso de que aquel se resistiera ó no supiera hacerlo. Así no podrán ocurrir dudas acerca de si se dió ó no conocimiento de la resolucion que se reclama.

Por razones idénticas á las indicadas se establece en el párrafo 2.° de la preinserta Real órden que los términos que se conceden para ampliar la justificacion de los espedientes, se consideren improrogables. La Direccion los señalará con prudencia para no colocar á nadie en una situacion difícil; pero los interesados deben tener siempre muy en cuenta el perjuicio que indudablemente se les seguirá si por su propia apatía no hacen en tiempo hábil las justificaciones que les convenga; perjuicio que de ninguna manera podrán atribuir á los acuerdos de la Administracion. Para evitar tambien en esto el mas leve descuido, debe V. S. encargar que las órdenes concediendo plazos á los interesados, se les hagan saber con las mismas formalidades que las resoluciones definitivas.

No debe confundirse, sin embargo, lo que es justificar un espediente con lo que es un trámite legal, y por lo tanto esencial del espediente mismo. Cuando la ley exige que informe necesariamente una corporacion ó dependencia del Estado, el informe debe evacuarse, y V. S. disponer que así se haga por todos los medios que las leyes le conceden. De este modo se evitará que, como ya ha sucedido, se declare contenciosamente la nuli-

(1) Véase la circular de la Direccion del ramo de 18 de Setiembre de 1866.

dad de espediente alguno, ó que se reponga al estado que tenia cuando se cometió la falta.

La Direccion cree que con estas esplicaciones no puede ofrecer duda alguna la Real disposicion que trascribe á V. S., y por tanto se limita á encargarle nuevamente que, al darla en esa provincia la debida publicidad, prevenga á todos que tanto la preinserta Real órden, como las instrucciones que contiene esta circular, han de ser exacta y puntualmente cumplidas.»

REAL ÓRDEN DE 27 DE OCTUBRE DE 1866.

Se dispone que las capitalizaciones se practiquen, no por la renta que efectivamente produzcan las fincas; sino por la que los peritos gradúen que debian producir (1).

REAL ÓRDEN DE 17 DE ENERO DE 1867.

Se manda: «1.° Que las administraciones de Hacienda pública admitan y dén curso á cuantas solicitudes de redencion de censos se presenten antes de haberse verificado la subasta.

2.° Que las mismas administraciones procedan sin embargo á capitalizar y anunciar la venta de censos, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 6.° de la ley de 15 de Junio de 1866.

Y 3.° Que V. I. (el Director general) haga las prevenciones oportunas á los administradores, á fin de que ni dificulten las redenciones que se pidan debidamente, ni dejen de preparar las ventas de censos para que puedan llevarse á efecto inmediatamente.»

REAL ÓRDEN DE 25 DE ENERO DE 1867.

Para evitar retrasos en las notificaciones á los rematantes de bienes nacionales y pago de los plazos, declaraciones de quiebra y apremios, se adoptan las disposiciones siguientes:

«1.° En el acto de las subastas y en los testimonios de estas se espresará el domicilio del mejor postor y el nombre y domicilio de los testigos que le abonaron, segun lo dispuesto en la Real órden de 18 de Febrero de 1860.

2.° Los espedientes y testimonios de subastas arreglados á instruccion, en los que se hará constar cuanto en la disposicion anterior se previene, se remitirán por los jueces que han entendido en las mismas al comisionado en el preciso término de 48 horas, á contar desde que la subasta tuvo efecto.

3.° Los comisionados remitirán en el mismo dia, ó á mas tardar en el siguiente, los referidos testimonios á la Direccion general.

4.° Acordadas las adjudicaciones de fincas ó redenciones de censos, la Direccion remitirá sin demora las órdenes á los respectivos gobernadores y estos las pasarán en el mismo dia á las administraciones de Hacienda pública.

5.° Las administraciones, en el preciso término de tres dias, harán las liquidaciones de cargas pasando seguidamente los espedientes á la comision.

6.° Los comisionados, en el término de ocho dias improrogables, harán notificar administrativamente la adjudicacion al rematante de la finca ó censo.

7.° La notificacion se hará observando las reglas siguientes:

Primera. Se buscará desde luego al rematante en el domicilio que espresó en la subasta, y si este resultare cierto, se dejará una cédula recogiendo otra en que firme el recibo.

Segunda. Si á la primera diligencia no fuere hallado, la cédula se entregará á su mujer, hijos, criados ó dependientes, y si ninguno de estos se presentare, se dará al vecino mas inmediato.

Tercera. Caso de no darse razon del rematante en el domicilio espresado, se buscará á cualquiera de los testigos de abono con el que designaron en la subasta, y se les entregará la cédula con las propias formalidades.

Cuarta. Si ni el que remató ni los testigos fuesen conocidos en el domicilio que fijaron, ó se manifestase que ellos y sus familias se habian ausentado, se les citará desde luego por el *Boletin oficial*, y en Madrid por el *Diario de Avisos*, para que dentro de 15 dias improrogables comparezcan á pagar el primer plazo.

Quinta. Si el domicilio designado en la subasta no fuese la capital de la provincia, el comisionado, obteniendo el auxilio del gobernador si es preciso, hará que las cédulas se remitan al alcalde respectivo para que entregue una al interesado y en su caso á los testigos, y devuelva la otra en el término de tres dias con la firma de haberse recibido la original.

Sesta. Cuando alguno de los testigos de abono resida en la capital, se entregará desde luego la cédula á éste para que la haga llegar al interesado.

Sétima. En las cédulas se ha de espresar la fecha en que se entregan, y cuando los que las recojan no sepan ó no quieran firmar, suscribirán la nota en que esto conste dos testigos.

8.° El comisionado unirá al espediente la cédula de notificacion, ó el *Boletin* y *Diario* cuando se hubiere hecho por edictos. Pasados los quince dias marcados por instruccion, el comisionado hará que en la administracion se ponga nota de

(1) Véanse la Real órden de 10 de Marzo y el Real decreto de 23 de Agosto de 1866.

si resulta pagado el primer plazo: caso negativo dará cuenta al punto al gobernador.

9.ª El gobernador, constando que han pasado los 15 dias y que no se ha pagado el primer plazo, mandará que desde luego se anuncie la finca en quiebra, y la venta se llevará á efecto sin demora. Para suspenderla, es indispensable que antes de la subasta comparezca el rematante y acredite con la carta de pago haber satisfecho el primer plazo.

10. El gobernador, al declarar la quiebra, oficiará al juez ante quien se celebró la subasta para que pueda imponer las responsabilidades á que se refieren los artículos 38 y 30 de la ley de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al promotor fiscal de Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva la responsabilidad que la ley impone.

11. Verificada la subasta en quiebra, si el Estado saliese por ella perjudicado, la administracion hará inmediatamente la liquidacion de la responsabilidad civil que afecta al primer rematante y procederá á exigirla por la vía de apremio.

12. Cada tres meses la administracion pasará al gobierno una relacion de las quiebras que se han acordado, espresando el nombre del quebrado, su domicilio, la finca que remató y la cantidad en que se subastó.

13. El promotor fiscal de Hacienda, impetrando el auxilio del fiscal de S. M. en la Audiencia cuando sea necesario, pedirá una relacion á los jueces de primera instancia ó promotores fiscales de los quebrados que han sido multados ó reducidos á prision, debiendo constar en ella la multa que pagaron ó la prision que sufrieron. De estas relaciones se pasará copia á los gobernadores, los cuales publicarán en el *Boletin* las de que se hace mérito en esta disposicion y en la precedente, para que los tribunales y la administracion puedan buscar á los que hayan eludido la ley.

14. Respecto á los deudores por segundos ó posteriores plazos se observará para el apremio, como hasta el dia, la Real órden de 3 de Setiembre de 1862. Esto no obstante, en vez de los avisos de que habla el artículo 161 de la instruccion, solo se dará uno diez dias antes de vencer los pagarés, recordando su vencimiento al que le hubiese firmado; y si trascurridos 20 desde la fecha del aviso, ó 10 desde que venció el pagaré, no se hubiese satisfecho, dispondrá la administracion que se proceda por la vía de apremio á hacerle efectivo.

15. Las administraciones no dejarán de dar los avisos, ni de conminar con los apremios, aunque los pagarés estén negociados y no se hallen en poder del Tesoro. Al efecto reclamarán las noticias que necesiten de quien pueda suministrarlas.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE 25 DE ENERO DE 1867.

Para conceder á los compradores de fincas que verifiquen el pago de los plazos en distinto punto de aquel en que estaban domiciliados, se dictan las reglas siguientes:

«1.ª En toda solicitud que tenga por objeto realizar un pago en distinto punto de aquel en que está domiciliado, se espresará el dia en que vence el plazo que trata de satisfacerse, el importe de éste, la provincia en que deberia ingresar y la finca ó censo de que proceda.

2.ª No se dará curso en esta Direccion á solicitud alguna sobre traslacion de pagos, si cuando se pide esta gracia resulta que hace mas de diez dias que está el pagaré vencido.

3.ª Aunque se espidan órdenes que autoricen el pago en distinto punto de aquel en que deben hacerse, los administradores de Hacienda pública no levantarán ni suspenderán apremio alguno por esta causa, hasta tanto que les conste por presentacion de la carta de pago que éste se ha realizado efectivamente.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE MARZO DE 1867.

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del espediente promovido por varios vecinos de Orbitas, provincia de Avila, en solicitud de que se declare nula la venta de unos prados denominados Carzar del Rio y Arroyo del Ponton, procedentes de los propios de dicho pueblo, por contener mucho más terreno que el ofrecido en los anuncios de subasta....

Considerando que, con arreglo á los principios del derecho comun y jurisprudencia constantemente seguida, se declaran nulas las ventas que tengan lugar con error en mas de la mitad del número de fanegas anunciado:

Considerando que siendo la de que se trata posterior á la Real órden de 10 de Abril de 1861, no puede ofrecerse duda de si le es aplicable la teoría de las ventas hechas como cuerpo cierto:

Considerando que aun cuando el art. 8.º del Real decreto de 10 de Julio de 1865 establece que el Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios causados por los agentes de la Administracion é independientes de la voluntad de los compradores, por tales se entienden únicamente aquellos funcionarios que ejercen facultades por delegacion directa del poder ejecutivo, y los peritos tasadores en las ventas de bienes nacionales, ya sean nombrados por la Administracion, ya por los compradores, nunca podrán adquirir otro carácter que el de testigos, puesto que el servicio que en tal concepto prestan lo ejercen con facul-

tades propias é independientes de todo acto administrativo:

Considerando que esta doctrina se encuentra establecida en el Real decreto de 5 de Marzo de 1864 (1);

S. M. conformándose con el dictámen del Consejo de Estado en pleno, se ha servido declarar nula la venta de los prados denominados Carzar del Rio y Arroyo del Ponton, siendo responsables los peritos que practicaron la primera tasacion de los daños y perjuicios á que hubieren dado lugar, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa á los tribunales por si hubiere lugar á exigirles responsabilidad criminal; y que se tenga entendido para lo sucesivo, que á los peritos tasadores no se les puede considerar como agentes de la Administracion por los actos de medicion y declaraciones periciales que al efecto dieren.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1867.

Se resuelve: «1.° Que se esceptúen de la fianza los olivos y demás árboles frutales, consignándose siempre en los anuncios que los compradores se comprometen á no descuajarlos ni cortarlos de una manera inconveniente, mientras no tengan pagados todos los plazos.

2.° Que las administraciones de Hacienda pública tengan el derecho de ordenar y hacer llevar á efecto la suspension de todo descuaje ó corta inconveniente que se denunciase, mientras no esté pagada en totalidad la finca.

Y 3.° Que es improcedente la exencion de fianza á los compradores de la dehesa titulada la Jara.» (Estaba poblada solamente de encina y chaparro.)

REAL ÓRDEN DE 3 DE ENERO DE 1868.

Con el fin de fijar un plazo dentro del cual hayan de verificarse las cesiones de fincas enajenadas por el Estado, para que el cedente quede libre de responsabilidad y esta recaiga únicamente sobre el cesionario, resolviendo á la vez las dudas nacidas de las diversas prácticas y disposiciones sobre esta materia, despues de varios considerandos se ordena lo siguiente:

«1.° Que las cesiones consumadas hasta el dia con autorizacion de los jueces de las subastas se tengan por válidas y subsistentes, considerando á los cesionarios subrogados en los derechos y obligaciones de los cedentes, siempre que en los respectivos espedientes de subasta consten las diligencias de cesion hechas ante los citados jueces.

2.° Que se consideren igualmente válidas las cesiones ya verificadas, cuando á virtud de ellas se hayan otorgado por el Estado las escrituras de venta en favor de los cesionarios.

Y 3.° Que para lo sucesivo queda reformado el párrafo 7.° del artículo 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, en el sentido de que los jueces admitirán las cesiones que hicieren los rematantes dentro de los 10 dias siguientes al pago del importe del primer plazo, siempre que este pago se haya realizado dentro del término de 15 dias marcado para dicho efecto en el artículo 145 de la misma instruccion, dando parte á las administraciones respectivas de las cesiones que ante ellos se verifiquen, á fin de que en su vista hagan las oportunas anotaciones en los libros de cuentas corrientes y subroguen á los cesionarios en las obligaciones de los cedentes.»

REAL ÓRDEN DE 14 DE ENERO DE 1868.

.....«Considerando que conforme al art. 10 de la citada ley de 15 de Junio de 1866, los capitales de censos que correspondan á particulares y graviten sobre fincas sujetas á la desamortizacion, están bajo la salvaguardia del derecho comun y de las escrituras de imposicion, y por lo mismo la redencion de dichos capitales con títulos de la Deuda no debe ser obligatoria si la rechazan los censualistas;.....» se resuelve: que cuando hayan sido vendidos como libres bienes desamortizados, sobre los cuales gravitasen censos, se lleve á efecto la redencion de estos abonándose al acreedor ó censualista en títulos de la Deuda consolidada la cantidad necesaria á producir una renta equivalente al 3 por 100 del capital, siempre que presten su asentimiento los interesados.

REAL ÓRDEN DE 7 DE MARZO DE 1868.

Se manda: «1.° Que una vez anunciada la subasta de cualquiera finca, no se admita reclamacion alguna dirigida á que se divida en suertes. Y 2.° Que la Junta superior de ventas apruebe las divisiones de fincas, siempre que las considere beneficiosas á los intereses del Estado, aun cuando el valor de alguna de las suertes no llegue á la cantidad de 2,000 escudos.»

REAL ÓRDEN DE 9 DE MARZO DE 1868.

«He dado cuenta á la Reina del espediente promovido por D. Nicolás Gomez, en alzada del acuerdo de esa Direccion general (la de propiedades y derechos del Estado), que declaró que el valor de las mejoras hechas por el esponente en la

(1) Por este decreto, fundándose en las razones del anterior considerando, se declaró innecesaria la autorizacion pedida por el juez de Hacienda de Toledo para procesar á los peritos que tasaron unas fincas de bienes nacionales. Puede verse en la *Coleccion legislativa*, Sentencias y decisiones del Consejo de Estado, número 62 de 1864.

casa, calle de Atocha de esta córte, núms. 137, 139 y 141, procedente de la congregacion de San Felipe Neri, cuya venta se habia anulado á consecuencia de haberse declarado dicha finca esceptuada de la desamortizacion, debia reclamarle de la indicada corporacion:.....

Considerando que, habiendo adquirido de la Hacienda el reclamante D. Nicolás Gomez la casa en cuestion en remate celebrado el 16 de agosto de 1865, la obligacion directa de sanear al comprador una vez declarado nulo dicho remate, es de la misma Hacienda, como vendedora, y no de la congregacion, segun los principios de derecho consignados en nuestras leyes:

Considerando que, como consecuencia de este principio, la Hacienda tendrá tambien una hipoteca legal, constituida sobre la misma finca, puesto que, por efecto de las mejoras que en ella ha hecho el comprador, ha venido á recibir un aumento de valor considerable, cuyos mayores rendimientos habrá de percibir la corporacion propietaria, á la cual tampoco le podrá ser permitido obtener lucro alguno en perjuicio de otro:

Considerando que en tal concepto el Estado tiene un derecho indisputable á reclamar inmediatamente de la congregacion de San Felipe Neri el importe total de dichas mejoras, y que para que estas no lleguen á ser menores de las que hubieren de entregarse al comprador, seria de todo punto conveniente que el abono respectivo que de ellas se haga por parte de la congregacion á la Hacienda, y de esta al comprador, se verifique en un mismo acto y de una sola vez, concurriendo como parte la espresada corporacion á la liquidacion que al efecto se practique por la administracion:

Considerando que, habiéndose acordado por ese centro directivo que se procediera á la venta de la finca de que se trata cuando ya tenia conocimiento de que la casa estaba en litigio y de que habia sido admitida la correspondiente demanda por la seccion de lo contencioso del Consejo de Estado, semejante determinacion no ha podido menos de ocasionar este conflicto, siempre gravoso, y embarazoso además para la Administracion del Estado;

S. M., conformándose con el dictámen de las secciones de Hacienda y de Gracia y Justicia del referido Consejo, se ha servido resolver:

1.° Que la Hacienda se halla inmediatamente obligada á abonar á D. Nicolás Gomez, comprador de la casa calle de Atocha de esta córte, señalada con los números 137, 139 y 141, el importe de las mejoras que ha verificado en la misma, segun el resultado de la liquidacion que se practique por la administracion en vista de los antecedentes necesarios al efecto.

2.° Que para que dicho importe no resulte menor luego que la Hacienda le reclame á su vez á la congregacion propietaria, se obligue á ésta á concurrir conjuntamente á dicha liquidacion, esponiendo cuanto crea convenirle.

3.° Que, en caso de que se resistiese á concurrir, practique la administracion por sí misma la liquidacion, indemnizando al comprador y dando conocimiento de dicha liquidacion á la congregacion para que le pare los perjuicios á que haya lugar.

Y 4.° Que, para evitar en lo sucesivo casos de esta naturaleza, no acuerde esa Direccion general ningun remate de fincas que estén pendientes de litigio ó sean objeto de reclamacion gubernativa hasta que ésta no sea resuelta de Real órden (1) »

REAL ÓRDEN DE 10 DE MARZO DE 1868.

«Para evitar los perjuicios que se irrogan al Estado cuando la falta de licitadores en la primera subasta de las fincas que se sacan á la venta exige que se anuncie la segunda por el tipo de la capitalizacion y ésta no representa su verdadero valor por ser reducida la renta, bien porque proceda de arrendamientos antiguos que no se han renovado, ó por otras circunstancias especiales, se dispuso en Real órden de 27 de Octubre de 1866 que las capitalizaciones se practicaran, no por la renta que efectivamente produjeran las fincas, sino por la que los peritos graduasen que debian producir. Sin embargo, la esperiencia ha venido á demostrar que aquella medida no ha sido suficiente para lograr el objeto con que se dictó, porque la graduacion pericial de la renta, que siempre debia hallarse en relacion directa con el valor de la finca señalado por los mismos peritos, no lo está en muchos casos, y aun se ha verificado en ocasiones que su capitalizacion no cubre el valor del arbolado. En su consecuencia, y á fin de precaver los perjuicios que con este motivo se originan al Estado y á las corporaciones de que proceden los bienes, S. M. la Reina (q. D. g.), en vista de lo propuesto por V. I. y de conformidad con el parecer de la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido reformar lo establecido en los artículos 183 y 185 de la instruccion de 1.° de Mayo de 1855 y en la Real órden de 27 de Octubre de 1866, disponiendo que en lo sucesivo se observen las reglas siguientes:

1.° Para sacar á la venta cualquiera finca se fijarán tres tipos, que serán: la tasacion pericial, la capitalizacion de la renta conocida que efectivamente produzca, y la capitalizacion de la renta que los peritos calculen debe producir.

2.° En los prédios que contengan arbolado, el valor que á éste se señale servirá tambien de cuarto tipo para los efectos que se indicarón en la regla siguiente.

(1) Véase la órden del Poder ejecutivo de 14 de Junio de 1869.

3.° De los cuatro tipos espresados, el mayor servirá de base para la primera subasta, y los demás por el órden descendente se adoptarán para las posteriores, en el caso de que en aquella no se presentasen licitadores.

4.° Cuando alguno de estos tipos no llegue á la mitad del que sirvió de base en la subasta anterior, se anunciará la siguiente por la cantidad que resulte como término medio entre ambos tipos.

5.° En ningun caso se subasturán las fincas que contengan arbolado por una cantidad menor que el valor que á éste se hubiese señalado.

6.° Cuando en las subastas indicadas no se hubiese presentado postor, la Junta superior de ventas podrá acordar la retasa de las fincas.

7.° Para que tengan exacto cumplimiento las disposiciones precedentes, se cuidará de que en todas las tasaciones espresen los peritos la renta que gradúan debe producir la finca, con inclusion del arbolado, puesto que el producto de éste debe formar tambien parte de la renta.»

REAL ÓRDEN DE 5 DE ABRIL DE 1868.

Se resuelve: «1.° Que por regla general son de abono los derechos devengados por los peritos en las tasaciones que hubiesen practicado por órden de la administracion del Estado en fincas procedentes de bienes nacionales y con anterioridad al Real decreto de 26 de Julio de 1844, por el que se mandó suspender la venta de dichos bienes.

2.° Que caso de existir algunas de estas fincas sin enajenar, los espresados derechos sean de cuenta de los compradores como todos los demás que se originen en las subastas, á cuyo efecto se pondrá en conocimiento de los mismos por medio de los anuncios correspondientes....»

REAL ÓRDEN DE 13 DE AGOSTO DE 1868.

«Vistas las dudas que han ocurrido á diferentes jueces de primera instancia y oficinas de Hacienda sobre si deben resolverse definitivamente por aquellos ó por estas las reclamaciones que se presenten con arreglo al art. 9.° de la ley de 15 de Junio de 1866 para el tanteo de las fincas que se saquen á subasta por el Estado:

Considerando que al ejercitarse el derecho de tanteo necesariamente se ha de fundar en títulos anteriores á la subasta, razon por la cual no pueden estimarse estas demandas como incidencias de la venta, sino como cuestion de propiedad, cuyo conocimiento incumbe esclusivamente á los tribunales de justicia:

Y considerando que entablándose dichos recursos contra el comprador de la finca y no contra el vendedor, segun lo que prescribe la ley de Enjuiciamiento civil, el Estado, que es quien enajena, no tiene interés alguno en su resolucion, por lo que tampoco es necesaria la reclamacion gubernativa á que se refiere el art. 173 de la Real instruccion de 31 de Mayo de 1855;

S. M. la Reina (q. D. g.) de conformidad con el parecer de las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y con el de la Direccion general de propiedades, se ha servido declarar que corresponde esclusivamente á los tribunales ordinarios el conocimiento y resolucion de las demandas de tanteo que se entablen con arreglo al citado art. 9.° de la ley de 15 de Junio de 1866, sin que sea necesaria su decision prévia en la vía gubernativa, ni que se entorpezca por esto el curso del espediente de subasta, que deberá seguir su tramitacion en las oficinas hasta posesionar al rematante, prévios los requisitos exigidos por las instrucciones vigentes; y es asimismo la voluntad de S. M. que se signifique á V. E. la conveniencia de que por el Ministerio de su cargo (el de Gracia y Justicia) se comunique esta resolucion á los funcionarios del órden judicial, con objeto de que no vuelvan á ocurrir las dudas y entorpecimientos que hasta ahora se han venido notando en la marcha de estos asuntos.»

REAL DECRETO DE 23 DE AGOSTO DE 1868.

«Art. 1.° Las subastas ordinarias de las fincas desamortizables serán cuatro.

Art. 2.° Los gobernadores de provincia acordarán, por falta de licitadores, la celebracion de cada una de dichas cuatro subastas.

Art. 3.° La primera subasta se anunciará con 30 dias de anticipacion y las demás con solo 20.

Art. 4.° Todas las fincas se tasarán por su valor en venta y renta, capitalizándose por la renta que produzcan, y á falta de ésta por la que gradúen los peritos.

Art. 5.° El tipo para las subastas será: para la primera el que resulte mayor entre la tasacion y la capitalizacion; para la segunda el 85 por 100 del tipo de la primera; para la tercera el 70 por 100 del mismo tipo; para la cuarta el 55 por 100 del tipo primitivo.

Art. 6.° Si en ninguna de estas subastas se presentasen licitadores, y el tipo de la tasacion ó capitalizacion fuese inferior al fijado para la cuarta, los gobernadores acordarán en seguida una quinta subasta, por el espresado tipo inferior de la tasacion ó capitalizacion.

Art. 7.° Intentados sin resultado los cuatro remates referidos, y el quinto en su caso, la subasta quedará abierta y se recibirá cualquiera proposicion que por escrito se presente al gobernador de la provincia. Con vista de la misma y bajo la base de su oferta, se anunciará un nuevo remate, remitiéndose á la Direccion los testimonios, el espediente de tasacion y el de las subastas anteriores. Para hacer la adjudicacion al mejor postor

en el caso indicado, se oirá á la Asesoría, y si ésta y la Direccion no estuviesen de acuerdo, se consultará al Ministerio antes de incluir la finca en la relacion de las que han de ser adjudicadas por la Junta (1).

Art. 8.° Los gobernadores ordenarán que las fincas cuya subasta queda abierta se comprendan cada dos meses en una lista que se publicará en el *Boletin oficial*.

Art. 9.° Quedan derogadas todas las disposiciones referentes á los tipos de las subastas y al órden de acordarlas, que sean contrarias á las disposiciones precedentes.»

DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1869.

«Art. 3.° Serán admitidos los bonos por todo su valor nominal en pago de los bienes nacionales que se enajenen por el Estado, como especialmente afectos al pago de los intereses y amortizacion del empréstito, con arreglo al decreto de 28 de Octubre último, y de los que puedan destinarse en adelante al mismo objeto.»

DECRETO DE ID. DE 22 DE DICIEMBRE DE 1868.

«Art. 1.° Los derechos de tasacion de los bienes nacionales puestos en venta no ingresarán en lo sucesivo en el Tesoro público.

Art. 2.° Los peritos tasadores percibirán sus derechos directamente, y de una sola vez, de los compradores de los espresados bienes, y las administraciones de Hacienda pública no admitirán el pago del primer plazo sin que dichos compradores presenten recibos que acrediten haber satisfecho los derechos de tasacion, y los devengados en el espediente de subasta. Estos recibos se unirán al testimonio del remate, que deben conservar aquellas oficinas.

Art. 3.° Si alguna finca no se enajenase por falta de licitadores despues de haberse celebrado las subastas prevenidas por la legislacion vigente, el Tesoro abonará á los peritos sus derechos con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto de gastos.

Art. 4.° A falta de los espresados peritos, los gobernadores podrán encomendar la tasacion de los bienes nacionales á funcionarios que disfruten sueldo del Estado ó de la provincia, que tendrán el deber de ejecutarla, percibiendo de los compradores en la forma indicada los derechos que les correspondan con sujecion á las tarifas vigentes, sin perjuicio del sueldo que disfruten por razon de su respectivo cargo.

Art. 5.° En lo sucesivo no se hará por el Tesoro anticipacion alguna á los peritos por cuenta de sus derechos.

Art. 6.° Los peritos serán responsables civil y criminalmente de toda falta ú omision que contengan sus tasaciones.

Art. 7.° Los peritos quedan bajo la inmediata dependencia de la comision de ventas en todo lo concerniente á las tasaciones que se les encarguen.

Art. 8.° Las precedentes disposiciones se ejecutarán desde luego para todas las nuevas tasaciones, dictándose las órdenes convenientes respecto á las ya realizadas, y por cuenta de las cuáles hubiese hecho el Tesoro anticipos, á fin de que sea reintegrado.»

DECRETO DE ID. DE 22 DE ENERO DE 1869.

«Artículo 1.° Los bonos del Tesoro de la emision de 200 millones de escudos, decretada en 28 de Octubre último, se admitirán al tipo del 80 por 100 en pago de los bienes nacionales vendidos antes de la citada fecha, y cuyos plazos hayan vencido con posterioridad á la misma, siempre que los pagarés correspondientes estén libres de toda hipoteca.

Tambien se admitirán por todo su valor en pago de dichos bienes, las cartas de pago de los imponentes por depósitos voluntarios en la Caja general de los mismos.

Art. 2.° Se admitirán asimismo los referidos bonos por todo su valor nominal en pago de los bienes nacionales y del patrimonio de la Corona que se hayan enajenado ó se enajenen desde el 23 de Octubre último, con sujecion á lo que dispone el mencionado decreto.

Art. 3.° Los redimentes ó compradores de censos comprendidos en las leyes de desamortizacion, cuyas redenciones hayan sido capitalizadas á cualquiera de los tipos que marca la ley de 11 de Marzo de 1859, y los del patrimonio de la Corona redimidos ó comprados antes del 28 de Octubre último y cuyos plazos vencieren con posterioridad á la citada fecha, podrán satisfacer el importe de las ventas y redenciones en bonos del Tesoro al tipo de 80 por 100.

Para el pago de las ventas ó redenciones de censos de igual procedencia que se hayan hecho ó hicieren desde el 23 de Octubre citado, se admitirán los bonos del Tesoro por todo su valor nominal.

Art. 4.° Los compradores de bienes desamortizados, cuyos remates hayan sido declarados en quiebra, podrán satisfacer el importe de los plazos en que se haya fundado aquella declaracion, en bonos del Tesoro al tipo del 80 por 100, siempre que realicen el pago total de los plazos vencidos dentro del término improrogable de dos meses, contados desde la fecha del presente decreto.

Art. 5.° Las cantidades en que aparezca en descubierto la Hacienda pública por el importe de

(1) Véanse los arts. 10 y sigs. del decreto de 23 de Junio de 1870.

ventas y redenciones anuladas ó de rentas indebidamente percibidas de bienes sujetos á la desamortizacion, cuyos espedientes estuvieren en curso de tramitacion al publicarse el decreto de 28 de Octubre último, podrán satisfacerse en bonos del Tesoro al tipo del 80 por 100, si los interesados optaren por esta forma de pago.

Art. 6.° Tanto los bonos como las cartas de pago de la Caja general de depósitos que ingresen en el Tesoro público por consecuencia de estas operaciones, serán inutilizados.

Art. 7.° El Ministro de Hacienda adoptará las disposiciones necesarias para el cumplimiento en todas sus partes del presente decreto.»

ÓRDEN DEL PODER EJECUTIVO DE 22 DE MARZO DE 1869.

Ministerio de Gracia y Justicia. «Visto el espediente promovido por D. Ignacio Carner, notario de esa ciudad (Barcelona), en solicitud de que se le faculte para formar un protocolo especial de las escrituras de interés de la Hacienda, y otro de las redenciones de censos y censales desamortizados, independientemente del que como tal Notario debe llevar de todas las que autorice entre particulares, y además para estender las primeras copias en los formularios impresos, como antes se ha venido haciendo: de conformidad con lo informado por la Junta directiva del Colegio notarial de ese territorio y propuesto por esa Sala de gobierno, el Poder ejecutivo ha resuelto desestimar la referida solicitud del notario D. Ignacio Carner, quien en el ejercicio de su cargo deberá ajustarse á las disposiciones de la ley de 28 de Mayo de 1862 y reglamento dictado para su ejecucion, sin acogerse á resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda sobre notariado, en cuyo ramo la competencia única y esclusiva es de la Secretaría de Gracia y Justicia.»

ÓRDEN DE ID. DE 7 DE ABRIL DE 1869.

«Visto el espediente instruido en esa Direccion general (la de propiedades y derechos del Estado) con motivo de las dudas que han surgido sobre la manera de aplicar, como jurisprudencia general, el Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 27 de Enero de 1863, en que se sentó el principio de que las fincas, vendidas por el Estado con linderos fijos y determinados antes de publicarse la Real órden de 10 de Abril de 1861, deben entenderse enajenadas en concepto de cuerpos ciertos, y no por la cabida señalada en los anuncios de subasta; y

Considerando que nunca pudo entrar en la mente de los autores de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 que las ventas se verificasen bajo este sentido, cuando tan minuciosamente detallaron en los artículos 106, 110 y 123 las obligaciones de los peritos respecto de la mensura de las fincas, clasificacion de los terrenos que las componen y demás circunstancias que pueden darlas á conocer, lo cual hubiera sido inútil si se hubiera tratado de enajenarlas por sus linderos como cuerpos ciertos:

Considerando que la Real órden de 10 de Abril de 1861 no dictó ninguna disposicion nueva, limitándose á esplanar y esclarecer lo dispuesto en la instruccion ya citada, y que por consiguiente no se la dá efecto retroactivo aplicándola á las ventas anteriores á su fecha:

Considerando que la prueba mas convincente de que la referida Real órden debe tener aplicacion á las fincas vendidas con anterioridad á su fecha, á pesar de establecerse lo contrario en el Real decreto-sentencia de 27 de Enero de 1863, la produce el hecho de haberse dictado para decidir un caso anterior:

Considerando, por último, que el mencionado decreto-sentencia no puede estimarse como una resolucion general aplicable á todos los casos, si no concreta para el que la motivó, y que por lo tanto no causa jurisprudencia;

El Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, oido el Consejo de Estado y de conformidad con el dictámen emitido por ese Centro directivo, se ha servido resolver que en los espedientes que pendan de resolucion ó que se incoen en lo sucesivo sobre falta ó esceso de cabida no se admita la doctrina de los cuerpos ciertos, cualquiera que haya sido la fecha del remate, y se fallen atendiendo únicamente á la cabida, calidad y demás circunstancias de la finca.»

ÓRDEN DE ID. DE 26 DE ABRIL DE 1869.

Ministerio de Gracia y Justicia. «Vista la comunicacion de esa junta directiva (la del colegio notarial de Valencia) consultando: 1.° Si los notarios pueden y deben rechazar la protocolizacion de los impresos adoptados por la Hacienda para las escrituras de venta de fincas del Estado y redencion de censos, y por consecuencia obligar á los compradores de tales bienes y redimistas á que acepten el otorgamiento por medio de escrituras manuscritas, cobrando en tal caso los derechos arreglados al arancel: 2.° Si todos los notarios pueden intervenir en los contratos en que tenga interés la Hacienda pública;... el Poder ejecutivo se ha servido resolver:

1.° Que es improcedente, segun las prescripciones de la ley del notariado y su reglamento, la protocolizacion de toda clase de impresos, debiendo estenderse las escrituras matrices manuscritas y con las demás condiciones legales, percibiendo los notarios los derechos taxativamente señalados en el arancel.

2.° Que todos los notarios pueden intervenir

en los contratos en que tenga interés la Hacienda, sin perjuicio de que esta elija para sus asuntos al notario colegiado que estime conveniente».....

ÓRDEN DE ID DE 11 DE JUNIO DE 1869.

«Considerando que la revocacion de las órdenes en que por el Gobierno se deniega la escepcion de terrenos de aprovechamiento comun, produce inevitablemente la nulidad de la venta de estas fincas, cuando han sido enagenadas por el Estado durante los procedimientos de la vía contenciosa:

Considerando, que si por una parte es conveniente impedir que con recursos infundados y temerarios se paralice la desamortizacion, interesa por otra al Estado evitar, en cuanto sea posible, las anulaciones de ventas por los perjuicios á que dan orígen;

El Poder ejecutivo en el ejercicio de sus funciones ha tenido á bien resolver, que en los casos de alzada contra dichas resoluciones, cuando conste á la Administracion que se ha contestado la demanda, se suspendan los procedimientos para la enagenacion de las fincas, las cuales serán consideradas como litigiosas hasta que el pleito sea resuelto por sentencia (1) »

ÓRDEN DEL REGENTE DEL REINO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1869.

.....«Y considerando que los compradores de fincas declaradas en quiebra por falta de pago de alguno de los plazos posteriores al primero se subrogan en lugar de los anteriores rematantes en cuanto á los pagarés que estos suscribieron y dejaron de hacer efectivos á su vencimiento, cuya obligacion aceptan comprometiéndose á satisfacer al contado el importe de dichos pagarés, conforme á lo prevenido por la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, lo cual se consigna en los anuncios de subasta como condicion especial del contrato:

Considerando que, como consecuencia indeclinable de ese principio, los segundos rematantes tienen la misma personalidad jurídica que los primeros, y están por lo mismo obligados á cumplir en esa parte el contrato que estos celebraron, sin variacion alguna, debiendo por lo tanto verificar el pago en la propia forma que ellos debieran efectuarlo:

Considerando que si los compradores quebrados celebraron sus contratos antes de la publicacion de los decretos del Gobierno provisional de 23 de Noviembre del año próximo pasado y de 22 de Enero del corriente, y no tenian por lo mismo derecho á realizar el importe de los pagarés en bonos del Tesoro, á no ser en el caso previsto por el artículo 4.° del segundo de los citados decretos, tampoco pueden tenerlo los segundos rematantes que representan en todo su personalidad:

Considerando que, por lo que respecta á los pagarés no vencidos al tiempo de verificarse la subasta en quiebra, el nuevo rematante no se subroga en lugar del quebrado, porque no acepta en cuanto á ellos las obligaciones de éste, si no que se obliga por sí en mas ó menos cantidad, segun tiene por conveniente, y otorga nuevos pagarés á su cargo sin ninguna relacion con los suscritos por aquel, quedando el quebrado responsable de la diferencia que resulte de menos de la segunda á la primera subasta, conforme á lo establecido por la citada Real órden de 3 de Setiembre de 1862:

Considerando que si los nuevos pagarés no representan á los procedentes de la anterior subasta, ni son su equivalencia, sino obligaciones de todo punto independientes, solo puede exigirse su realizacion con arreglo á las disposiciones vigentes en la época en que se celebró el contrato ó en que debieran hacerse efectivos, y en su consecuencia los compradores que los otorgaron deben gozar del beneficio de satisfacer su importe en bonos del Tesoro con arreglo á los artículos 1.° y 2.° del citado decreto de 22 de Enero último, segun el caso en que se encuentren;

S. A., vistos los informes evacuados por las Direcciones generales del Tesoro y de contabilidad de Hacienda pública, y de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido resolver que D. Fernando Iscar no tiene derecho á que se le admita en bonos del Tesoro el importe de los pagarés cuya falta de pago produjo la declaracion de quiebra de la finca á que se refiere su instancia, y que debe satisfacer al contado por virtud del remate que de la misma hizo en 31 de Diciembre del año último, conforme á lo dispuesto por la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, pudiendo solo hacer efectivos en dichos bonos los pagarés suscritos por él mismo, puesto que celebró su contrato con posterioridad al dia 28 de Octubre de 1868, con arreglo á lo determinado por el art. 2.° del Decreto de 22 de Enero del año actual.

Esta resolucion es la voluntad de S. A. que se comunique á los jefes económicos de las provincias, para que la tengan presente como regla general en los casos análogos que ocurran, y dispongan que se publique en los *Boletines oficiales*, previniendo á los comisionados de ventas que cuiden de hacer con arreglo á ella la advertencia oportuna en los anuncios de subastas de la clase de que se trata para conocimiento de los licitadores.

Al propio tiempo, deseando S. A. prevenir las dudas que acaso puedan suscitarse sobre la forma en que debe hacerse el pago de las fincas subas-

(1) Véase el art. 4.° de la Real órden de 9 de Marzo de 1868.

tadas en quiebra por no haberse satisfecho por sus rematantes los primeros plazos, y teniendo en cuenta que en estos casos los segundos compradores no se subrogan en nada en lugar de los quebrados, sino que contraen una obligacion nueva de todo punto, independiente de la de aquellos, se ha servido tambien declarar que dicho pago puede realizarse en bonos del Tesoro al tenor de lo dispuesto por los artículos 1.° y 2.° del decreto repetidamente citado de 22 de Enero del corriente año; pero en la inteligencia de que, si los quebrados adquiriesen de nuevo la finca por cesion del segundo rematante, deberán hacerlo en la forma á que estaban obligados, segun el contrato que hicieran anteriormente, y cuya falta de cumplimiento produjo la quiebra, sobre lo cual deberá tambien hacerse la oportuna advertencia en los anuncios de subasta (1).»

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION ECONÓMICO-PROVINCIAL, APROBADO POR DECRETO DEL REGENTE DE 8 DE DICIEMBRE DE 1869.

«Art. 28. Compete tambien á las secciones administrativas preparar y dar curso á los espedientes de subasta pública para el arrendamiento de las fincas y pertenencias del Estado, el exámen y conservacion de los relativos á la venta de las fincas y censos, y la redencion de éstos, con arreglo á las leyes de desamortizacion; y además la custodia de los inventarios de los bienes, su anotacion y adiciones que procedan para que siempre consten en ellos las fincas que posee el Estado, las que ha vendido y aquellas de que se haya incautado la Hacienda en virtud de investigaciones, de adjudicaciones en pago de débitos y por cesiones canónicas ú otras causas.

Como auxiliares de las administraciones económicas se conservarán, mientras se consideren necesarios, los cargos de comisionados principales de ventas de bienes desamortizados. Los individuos que los desempeñen se regirán en todos sus actos oficiales por la instruccion de 31 de Mayo de 1855; pero teniendo presente que los jefes de las administraciones económicas ejercen la autoridad administrativa que aquella atribuyó á los gobernadores.

Art. 39. La intervencion incurrirá en responsabilidad si, llegado el término de los plazos marcados por las instrucciones de los diferentes ramos para el ingreso en caja del importe de los derechos liquidados á favor de la Hacienda por las contribuciones é impuestos, por las rentas de propiedades del Estado y por vencimiento de los pagarés de compradores de bienes nacionales, no advierte al Jefe económico el estado de la recaudacion para que la active en los términos establecidos en las instrucciones, ó no hace uso de la facultad que le concede el art. 37, dando cuenta de la ineficacia de sus gestiones á la Direccion general de contabilidad.

Art. 84. Los jefes de las administraciones económicas tendrán los deberes y atribuciones siguientes:.....

41. Ejercer todas las atribuciones y cumplir todos los deberes que impusieron á los gobernadores de las provincias la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y demás disposiciones vigentes, salva la facultad que corresponde á los gobernadores de presidir las juntas provinciales de ventas, si estiman concurrir á ellas en uso de la autoridad superior y vigilancia que ejercen.....

45. Cuidar bajo su mas estrecha responsabilidad de que en tiempo oportuno se preste por los compradores de fincas que contengan arbolado, la fianza á que se refiere el art. 147 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Art. 88. Los jefes de las secciones de propiedades y derechos del Estado tendrán los deberes y obligaciones siguientes:.....

2.° Promover el cobro de toda clase de créditos de la Hacienda por rentas y ventas de bienes del Estado, y por obligaciones á metálico y á papel de la Deuda, procedentes de enajenaciones anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855.

3.° Cuidar inmediatamente de la administracion de los bienes de Estado, del clero y de secuestros, situados en la capital de la provincias, con sujecion á las instrucciones del ramo y á las órdenes verbales del jefe económico de la provincia, y vigilar con esquisito celo la conducta que, en el mismo servicio y con relacion á los bienes que se hallen en los demás pueblos, observen los administradores subalternos para evitar abusos y perjuicios á la Hacienda.....

5.° Ocupar en las juntas provinciales de ventas de bienes nacionales el puesto señalado á los contadores de Hacienda pública por el art. 98 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

6.° Desempeñar, en cuanto se refiera á la rectificacion y custodia de inventarios ó registros de fincas y censos, capitalizaciones, liquidaciones, rebajas de cargas y custodia de espedientes de ventas, las funciones encomendadas tambien á los contadores por el art. 103 de la ya citada instruccion de 31 de Mayo de 1855.

7.° Facilitar á los comisionados y agentes investigadores todos los datos que puedan ser convenientes para el mejor éxito de su mision, ó sea para conseguir el descubrimiento de rentas y propiedades detentadas.

8.° Examinar periódicamente los inventarios ó registros de las fincas y rentas que pertenecen al Estado y adicionarlos con todas las que se hayan descubierto por los investigadores ó por la administracion.

(1) Véase el decreto de 23 de Junio de 1870.

12. Cuidar de que se promueva la enajenacion de los bienes desamortizados en los términos que previenen las instrucciones, y formar ó continuar, segun los casos en ellas previstos, todos los espedientes á que dé lugar este servicio, proponiendo en ellos al jefe de la administracion económica la oportuna resolucion, ya sea definitiva, si está dentro del círculo de sus atribuciones, ya de trámite, si corresponde á la Direccion general del ramo continuar la instruccion y resolver el asunto.

17. Hacer que los compradores de bienes desamortizados otorguen lo pagarés correspondientes con todos los requisitos de instruccion, y pasarlos con relaciones nominales duplicadas á la intervencion para que se formalice su ingreso en caja.

18. Cuidar de que los compradores que satisfagan el importe de plazos vencidos, ó que anticipen el valor de los que no se hallen en este caso, recojan como documento demostrativo de su solvencia los mismos pagarés requisitados con arreglo á instruccion, á no ser que aquellos que se descuenten se hallen en poder del Banco de España, en cuyo caso únicamente podrán dárseles las cartas de pago que produzcan los ingresos, reclamando inmediatamente estos valores, y avisando á los interesados cuando se reciban, para que se presenten á canjearlos por las correspondientes cartas de pago.

19. Hacer que la liquidacion, tanto de los derechos como de las obligaciones de la Hacienda por los ramos á cargo de la seccion, se practique con arreglo á los preceptos de las instrucciones de 31 de Mayo de 1855 y 2 de Enero y 16 de Abril de 1856 y demás órdenes posteriores.

22. Exigir bajo su mas estrecha responsabilidad que los compradores de fincas que contengan arbolado, presten oportunamente la fianza á que se refiere el art. 147 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

DECRETO DE ID. DE 7 DE MARZO DE 1870.

«Artículo único. Se declaran comprendidos en el art. 2.° de la instruccion de 3 de Diciembre último, sobre el modo de hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda, á los deudores por plazos de fincas del Estado, por rentas y censos y por cualquier otro concepto de la misma procedencia (1).»

ÓRDEN DEL REGENTE DE 29 DE ABRIL DE 1870, CIRCULADA POR LA DIRECCION EN 24 DE MAYO SIGUIENTE.

«..... Resultando que publicada la ley de 1.° de mayo de 1855, ha surgido la duda de si á tenor de la misma era ó no obligatoria para aquellos (los compradores de bienes nacionales) la adquisicion de tales documentos (las escrituras de venta), puesto que no previniendo cosa alguna acerca del particular, el obligarles al otorgamiento equivale á imponerles que ejerciten su propio derecho, lo cual parece anómalo y violento, porque los derechos, á diferencia de las obligaciones, no son exigibles; sino, por el contrario, renunciables á voluntad de aquel á cuyo favor están constituidos;

Y resultando tambien que, apoyados en esta doctrina, se han opuesto al referido otorgamiento diferentes compradores, entre ellos 93 del juzgado de Orgaz, mientras que otros varios, por el contrario, lo han solicitado.

Vistas las Reales órdenes de 1.° de Diciembre de 1843, 11 de Enero de 1844, Real decreto de 23 de Mayo de 1845, é instruccion de 31 de Mayo de 1855:

Considerando que los contratos de compra-venta de bienes nacionales son escriturarios, segun se desprende de los artículos 103, 167, 168 y 169 de la citada instruccion:

Considerando que no es sólo un derecho del comprador el otorgamiento de la correspondiente escritura, sino que le tiene tambien el Estado para garantir la solvencia de aquel con la misma finca que le vende:

Considerando que el artículo 175 de dicha instruccion ordena implícitamente el otorgamiento al relevar á los compradores del pago del derecho de hipotecas durante los cinco años siguientes á la venta, mas no de la obligacion de estender el instrumento público, cuya existencia se establece en la instruccion, no con carácter permisivo, sino de una manera preceptiva y fundada en derechos por parte del Estado:

Considerando que siendo el contrato de compra-venta de bienes nacionales de los que exigen el otorgamiento de escritura, es necesaria esta para que se considere perfecto, con arreglo á las disposiciones de la ley de Partida, siguiendo en él la jurisprudencia consignada en nuestra legislacion, por la cual de todo título por el que se trasmitan derechos y acciones reales debe tomarse razon en la contaduría de hipotecas y ahora en el registro de la propiedad; obligacion que se halla establecida desde 1768 por una pragmática, que es la ley 3.ª, título 16, libro 10 de la Novísima Recopilacion:

Considerando que las disposiciones posteriormente dictadas acerca de este punto, se han encaminado y encaminan á que tenga efecto la inscripcion de todo instrumento público por el que se trasmita dominio ó derecho real, procurando su otorgamiento con los requisitos que previenen las leyes hipotecaria y del notariado:

Considerando que estando llamado á ser el catastro de España fuente de riqueza pública, deben los gobiernos vencer, por cuantos medios estén á

(1) Véase el decreto de 23 de Junio de 1870.

su alcance, los obstáculos que existan para establecerlo, lo cual se conseguirá en parte con la inscripcion de las fincas procedentes de bienes nacionales en el registro de la propiedad:

Considerando que siendo el contrato de compraventa obligatorio para las dos partes que concurren á celebrarlo, cualquiera de ellas tiene espedito derecho para obligar á la otra á perfeccionarlo por medio de la correspondiente escritura.

Considerando, por último, que las mencionadas Reales órdenes de 1.° de Diciembre de 1843, 11 de Enero de 1844 y Real decreto de 23 de Mayo de 1845, no deben considerarse derogadas por la ley de 1.° de Mayo de 1855, por la sola circunstancia de no declararlas espresamente en vigor, cuando lo mismo sucede con otras muchas disposiciones anteriores que no menciona, pero que sin embargo rigen y se observan para la desamortizacion de los bienes nacionales;

S. A. el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I. ha tenido á bien resolver:

1.° Que el otorgamiento de las escrituras de ventas de bienes nacionales, es obligatorio á los compradores de los mismos que se opongan á ello.

2.° Que á los que no hubieren cumplido con este requisito se les conceda el plazo de tres meses para verificarlo.

3.° Que ese mismo se entienda para todos aquellos que los adquieran en lo sucesivo, contándose desde el dia en que verifiquen el pago del primer plazo del remate.

4.° Que finalizados los indicados plazos proceda la Administracion á exigir el cumplimiento por la vía de apremio, contra todos aquellos que lo hubieren resistido.

Y 5.° Que á fin de que lleguen á conocimiento de todos los compradores obligados, se inserten estas disposiciones en los *Boletines oficiales* de las provincias».....

ARANCELES NOTARIALES,

APROBADOS POR LA LEY DE 11 DE JUNIO DE 1870.

10. «Las escrituras de ventas de propiedades y derechos del Estado y las de redencion de censos á que se refiere el decreto de 22 de Diciembre de 1868, se cobrarán, por ahora, con arreglo á lo dispuesto en el citado decreto y en la instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

DECRETO DEL REGENTE DE 23 DE JUNIO DE 1870.

«Artículo 1.° Son aplicables á la exaccion de los débitos por rentas, pensiones y plazos de ventas de bienes nacionales las disposiciones de la instruccion de 3 de Diciembre de 1869, dictada para los procedentes de las contribuciones é impuesto que la misma menciona.

Art. 2.° Además de las cantidades que están señaladas en concepto de dietas á los comisionados de apremio por razon de su cometido, se exigirá el 6 por 100 de interés anual en concepto de demora á los deudores; debiendo aplicarse al Tesoro este recargo, y figurando en las cuentas del mismo como productos eventuales del ramo, que se liquidarán al realizarse el plazo respectivo.

Art. 3.° Los intereses de demora respecto de los plazos y créditos vencidos hasta el dia se computarán á contar desde 20 dias despues de la publicacion del presente decreto; y respecto de los plazos y créditos que en lo sucesivo venzan, á contar desde el dia en que sean exigibles con arreglo al art. 161 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Art. 4.° El apremio á los deudores por plazos de ventas de fincas y por los intereses de demora á que se refieren los dos artículos anteriores, se dirigirá siempre contra las adquiridas del Estado y de que procede el débito, sin perjuicio de encaminar tambien la accion ejecutiva contra los restantes bienes del deudor, si los hubiera, por el órden establecido en el art. 949 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 5.° Las administraciones económicas, á quienes toca la ejecucion de las anteriores prevenciones, quedan responsables, no solo de su puntual observancia, sino tambien del pago mancomunadamente con los deudores de los intereses de demora, si por negligencia ú otras causas dependientes de su voluntad consienten términos mas largos en los procedimientos que los que las leyes establecen.

Art. 6.° Las fincas del Estado, que en adelante sean declaradas en quiebra por falta de plazos sucesivos al primero, se considerarán para los efectos de su nueva venta como no subastadas anteriormente, volviendo por tanto á quedar en la misma situacion que las pendientes de primer remate.

Art. 7.° Las operaciones preliminares de tasacion y capitalizacion á que deberán sujetarse, y las subsiguientes de subastas y pagos del precio del remate, se ajustarán á las prescripciones generales de las leyes desamortizadoras, en igual forma que se verifica respecto de las fincas que salen por primera vez á la venta.

Art. 8.° Son aplicables en consecuencia á las referidas fincas en quiebra las disposiciones del Real decreto de 23 de Agosto de 1868, escepto en la parte modificada por el presente, respecto á subastas abiertas; y lo son asimismo las órdenes é instrucciones vigentes sobre admision de bonos del Tesoro para el pago de las fincas comprendidas en el art. 6.°

Art. 9.° Los primitivos compradores de las fincas que se declaren en quiebra por no pagar los plazos sucesivos al primero, quedarán respon

sables á satisfacer las diferencias que resulten entre el precio del primer remate y el que se obtenga en la subasta en quiebra, así como tambien las que en su caso aparezcan, si éste no se pagase en metálico y sí en bonos del Tesoro ú otra clase de papel, entre el valor de los mismos á precio de cotizacion en el dia de su entrega en caja y el de emision de estas clases de valores públicos.

Art. 10. Verificadas sin resultado las cuatro subastas, ó las cinco en su caso, que previenen los artículos 1.° y 6.° del Real decreto de 23 de Agosto de 1808, la Direccion acordará, segun lo estime mas conveniente á los intereses del Estado, la retasa de las fincas por peritos distintos de los que hicieron el primer justiprecio, ó que quede abierta la licitacion en los términos establecidos en el artículo 7.° del citado Real decreto; pero en este último caso no se admitirá proposicion que no cubra el 30 por 100 del tipo por el cual se anunció la finca en la primera subasta.

Art. 11. Si ejecutada la subasta abierta bajo la proposicion mas alta de las presentadas cubriendo el espresado tipo del 30 por 100 no resultara postor que la mejorase, será obligatoria para el Estado la adjudicacion de la finca á favor del autor de dicha proposicion con tal que entre la Direccion general de propiedades y derechos del Estado y su seccion de letrados, á la cual se oirá siempre en estos casos, hubiere conformidad para proponer á la Junta superior de ventas la adjudicacion, á tenor de lo que se establece en el final del espresado art. 7.° del mencionado Real decreto.

Art. 12. El gasto que ocasionen las nuevas tasaciones de fincas declaradas en quiebra se satisfará por los primitivos compradores de las mismas, y el de los justiprecios ó retasas en su caso para las de subastas abiertas de fincas que no procedan de quiebra, por sus rematantes.

Art. 13. Se declaran sin efecto alguno los remates celebrados de fincas en quiebra y en subastas abiertas cuyas adjudicaciones no se hubieren acordado por la Junta superior de ventas á la fecha del presente decreto.

Art. 14. El Ministro de Hacienda queda facultado para espedir las instrucciones necesarias á su cumplimiento y para resolver las dudas que puedan ocurrir en su aplicacion.»

LEY PROVIS. DE CONTAB. DE 25 DE JUNIO DE 1870.

«Art. 15. Tambien corresponderán al órden administrativo la venta y administracion de bienes desamortizados y propiedades del Estado. Las contiendas que sobre incidencias de subastas ó de arrendamientos de los mismos bienes ocurran entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventilarán ante las corporaciones y con sujecion á los trámites que dispongan las leyes é instrucciones que regulan estos servicios.

Las cuestiones sobre dominio ó propiedad, cuando lleguen al estado de contenciosas, pasarán á los tribunales de justicia á quienes corresponda.»

SECCION II.

Leyes y disposiciones sobre bienes del clero secular y regular, de las órdenes militares, cofradías, obras pías y santuarios.

REAL DECRETO DE 19 DE FEBRERO DE 1836.

«Art. 1.° Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raices de cualquiera clase, que hubiesen pertenecido á las comunidades y corporaciones religiosas estinguidas (1).»

LEY DE 29 DE JULIO DE 1837.

Despues de declarar estinguidos en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, con algunas escepciones, respecto de los bienes se dispone lo siguiente:

«Art. 20. Todos los bienes raices, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos, inclusas las que quedan abiertas, se aplican á la caja de amortizacion para la extincion de la Deuda pública, quedando sujetos á las cargas de justicia que tengan sobre sí.....

Art. 21. Se esceptuan de la disposicion contenida en el artículo anterior los bienes, rentas derechos y acciones pertenecientes á los colegios de mision para las provincias de Asia, á la obra pía de los Santos lugares de Jerusalen, y los que se hallen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública, como tambien la parte de los correspondientes al monasterio del Escorial que resulte pertenecer al Real patrimonio.»

LEY DE 2 DE SETIEMBRE DE 1841.

«Art. 1.° Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de prédios, derechos y acciones que consistan, de cualquiera orígen y nombre que sean y con cualquiera aplicacion ó destino con que hayan sido donadas, compradas ó adquiridas, son bienes nacionales.

Art. 2.° Son igualmente nacionales los bienes, derechos y acciones de cualquier modo correspondientes á las fábricas de las iglesias y á las cofradías.

(1) Las demás disposiciones de este decreto, la instruccion para llevarlo á efecto y la ley de 28 de Julio de 1837 que lo aprobó y confirmó, pueden verse en la seccion anterior.

Art. 3.° Se declaran en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, fábricas de las iglesias y cofradías de que tratan los artículos anteriores.

Art. 6.° Se esceptúan de lo dispuesto en los artículos anteriores:

1.° Los bienes pertenecientes á prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo ó pasivo.

2.° Los bienes de cofradías y obras pías procedentes de adquisiciones particulares para cementerios y otros usos privativos á sus individuos.

3.° Los bienes, rentas, derechos y acciones que se hallen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública.

4.° Los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anejos ó ayuda de parroquia.

5.° El palacio morada de cada prelado y la casa en que habiten los curas párrocos y tenientes, con sus huertos ó jardines adyacentes.»

Por los artículos 10, 11 y 12 se dispone que se ejecute la venta de estos bienes en la forma prevenida para la de los demás bienes nacionales, debiendo verificarse el pago del importe del remate en cuatro años y cinco plazos, el 10 por 100 en dinero metálico y el resto en deuda del Estado, escepto las fincas de menor cuantía cuyo precio debia pagarse en dinero metálico y en veinte plazos (1).

REAL DECRETO DE 26 DE JULIO DE 1844.

«Art. 1.° Se suspende la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades religiosas de monjas, hasta que el Gobierno, de acuerdo con las Córtes, determine lo que convenga.....»

LEY DE 3 DE ABRIL DE 1845.

«Art. único. Los bienes del clero secular no enajenados y cuya venta se mandó suspender por Real decreto de 26 de Julio de 1844, se devuelven al mismo clero.»

(1) Como las disposiciones de esta ley han sido modificadas por otras posteriores, no se insertan las demás que contiene sobre esta materia. Por la propia razon no se insertan tampoco la instruccion y reglamento que en 2 y 3 de Setiembre de 1841 se dictaron para su ejecucion, ni el Real decreto de 11 de Marzo de 1843 y Real órden de 5 de Mayo de 1844, que contienen varias aclaraciones acerca de las escepciones establecidas en el art. 6.° de la misma. Véanse las disposiciones contenidas en la seccion anterior, y especialmente la ley de 1.° de Mayo de 1855, instruccion de 31 del mismo mes, ley é instruccion de 11 de Julio de 1856, y los Reales decretos de 11 de Octubre de 1856 y 11 de Noviembre de 1864.

REAL ÓRDEN DE 24 DE SETIEMBRE DE 1845.

Se declara que, no habiendo pertenecido al clero secular los bienes procedentes de ermitas, santuarios y cofradías, no deben incluirse en la devolucion acordada por la ley de 3 de abril anterior.

REAL ÓRDEN DE 20 DE ABRIL DE 1846.

Se declaran nulas las ventas de los bienes de ermitas, santuarios y cofradías que se hubieren verificado con posterioridad al Real decreto de 13 de Agosto de 1844 (es el mismo de 26 de Julio, que se comunicó con esta fecha), por el que se mandó suspender la venta de los bienes del clero, y se previene se indemnice á los compradores de las cantidades que hubiesen satisfecho por tal concepto.

REAL DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1848.

Se mandó proceder á la venta de todos los bienes raíces, acciones, derechos y rentas procedentes de las encomiendas vacantes de las cuatro órdenes militares, maestrazgos, edificios conventos y los censos de todas clases, propiedad de la Nacion, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 19 de Febrero de 1836, confirmado por la ley de 28 de Julio de 1837 (1), y á la de todos los bienes raíces, censos, rentas, derechos y acciones procedentes de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, conforme á la ley de 2 de Setiembre de 1841.

REAL DECRETO DE 1.° DE MAYO DE 1848.

Se declaran en venta todos los bienes raíces, censos, rentas, derechos y acciones procedentes de las encomiendas de la órden de San Juan de Jerusalen, disponiendo se ejecuten con sujecion al Real decreto de 19 de Febrero de 1836 y demás disposiciones posteriores, vendiéndolos á metálico, entregándose la 5.ª parte al hacerse la adjudicacion, y el resto por octavas partes en los ocho años siguientes.

REAL DECRETO DE 11 DE JULIO DE 1848.

Se mandó suspender la enajenacion de los bienes de encomiendas, maestrazgos, ermitas, cofradías y demás que se decretó en 7 de Abril del mismo año 1848.

REAL DECRETO DE 6 DE SETIEMBRE DE 1850.

Se dictan reglas para facilitar la enajenacion de

(1) Véanse estas disposiciones en la sec. 1.ª

los bienes de todas clases procedentes de las encomiendas de la órden de San Juan de Jerusalen, declarados en venta por el Real decreto de 1.° de Mayo de 1848.

REAL ÓRDEN DE 21 DE SETIEMBRE DE 1850.

Se dictan reglas con el propio objeto antes espresado.

REAL ÓRDEN DE 30 DE OCTUBRE DE 1850.

Se resuelve: «1.° Que de las fincas que las comunidades religiosas adquirieron á carta de gracia ó con el pacto de retroventa, se consideren como censos para los efectos de redencion ó venta aquellas en que se reservaron los vendedores la posesion y el disfrute pagando al comprador una pension anual.

2.° Que en todas las demás en que la enajenacion fué completa por la entrega de la cosa vendida al comprador, sin otra limitacion que el derecho de retroventa que el vendedor se reservó, se saquen á pública subasta, anunciando el pacto de retroventa á que están sujetas y que habrá de respetar el comprador, sin que por este gravámen se haga rebaja alguna en el precio, puesto que la desventaja de adquirir una finca sin la seguridad absoluta de conservarla se halla compensada para los compradores con el beneficio de recibir en caso de retroventa dinero efectivo por las fincas que pagaron en créditos contra el Estado.

Y 3.° Que los derechos de retroventa que las comunidades tenian sobre fincas ajenas, se enajenen á favor de los dueños de estas por vía de redencion, valúandolos por cálculo prudencial, y que en el caso de no convenir en adquirirlos por la tasacion, se saquen á pública subasta.»

CONCORDATO DE 16 DE MARZO DE 1851,

PUBLICADO COMO LEY EN 17 DE OCTUBRE SIGUIENTE.

Art. 31. «.....Además, los Arzobispo y Obispos conservarán sus palacios y los jardines, huertas ó casas que en cualquiera parte de las diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enajenadas.....»

Art. 33. «.....Además, los curas propios, y en su caso los coadjutores, disfrutarán las casas destinadas á su habitacion, y los huertos ó heredades que no se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominacion de *Iglesarios*, *Mansos*, ú otras.....»

Art. 35. «.....Se devolverán desde luego y sin demora á las mismas (comunidades de religiosas), y en su representacion á los prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han sido enajenados. Pero teniendo Su Santidad en consideracion el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenderse con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los espresados bienes por medio de subastas públicas, hechas en la forma canónica y con intervencion de persona nombrada por el Gobierno de S. M. El producto de estas ventas se convertirá en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital é intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en proporcion de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos indicados, y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho á percibirlas, sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las pensionadas.»

«Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dotacion del culto y del clero serán:

1.° El producto de los bienes devueltos al clero por la ley de 3 de abril de 1845.....

3.° Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes y que vacaren.....

Además se devolverán á la Iglesia desde luego y sin demora todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la espresada ley de 1845 y que todavía no hayan sido enajenados, inclusos los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo.

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos, entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas, aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este gravámen.

El Gobierno responderá siempre y esclusivamente de las impuestas sobre los bienes que se

hubieren vendido por el Estado libres de esta obligacion.

Art. 40. Se declara que todos los espresados bienes y rentas pertenecen en propiedad á la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero.....»

«Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar á la religion de este convenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. católica y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á la sazon vigentes, y estén en posesion de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningun tiempo ni manera por Su Santidad, ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; antes bien, así ellos como sus causahabientes disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y productos.»

«Art. 45. En virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios. Y por tanto una y otra de las partes contratantes prometen por sí y sus sucesores la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consta.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE MAYO DE 1851.

Se manda que, interin se acuerda lo que corresponda para llevar á efecto el concordato celebrado con la Santa Sede, se suspenda desde luego la venta de los bienes procedentes de las estinguidas comunidades de regulares de ambos sexos, clero secular, ermitas, santuarios, hermandades y cofradías.

REAL DECRETO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1851.

Se dispone la entrega á los diocesanos de los bienes eclesiásticos á que se refieren el párrafo 4.° del art. 35 y el 6.° del 38 del concordato, y que se cobrarán por aquellos, como parte de la dotacion del culto y clero, las rentas correspondientes á los mismos bienes desde 1.° de Enero de 1852, mientras no se enajenaran.

REAL DECRETO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1851.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dictaron reglas para la enajenacion de las fincas, censos, derechos y acciones devueltos al clero como de su propiedad, conforme al párrafo 4.° del art. 35 y al 6.° del 38 del concordato. No se insertan por que se hallan modificadas por el convenio celebrado con la Santa Sede en 1859 y publicado como ley en 4 de Abril de 1860. Por la propia razon no se inserta tampoco la Real órden comunicada en 16 de Abril de 1853 por el Ministerio de Hacienda al de Gracia y Justicia y circulada por este en 30 del mismo mes, dictando reglas para dar cumplimiento al citado Real decreto de 9 de Diciembre de 1851.

REAL ÓRDEN DE 28 DE JULIO DE 1855.

«He dado cuenta á S. M. la Reina (q. D g.) de la consulta elevada á este Ministerio por V. I. (*el Director general de bienes nacionales*) en vista de las reclamaciones de varios interesados, proponiendo la aprobacion y validez de los remates de fincas del clero y encomiendas militares que tuvieron efecto antes de la publicacion de los Reales decretos de 26 de Julio de 1844, 20 de Octubre de 1847 y 11 de Julio de 1848, suspendiendo las ventas, y que fueron causa de paralizarse la aprobacion de las subastas y adjudicacion de las fincas á los mejores licitadores. Enterada su S. M. y considerando:

1.° Que la aprobacion y adjudicacion de los remates eran condiciones admitidas por los licitadores á su perjuicio, sin preceder las cuales el acto de la subasta era de ningun valor ni efecto, ni concedia derecho á los rematantes para exigir su cumplimiento:

2.° Que interin no estuviesen cumplidas todas y cada una de las condiciones establecidas para las ventas, el contrato no se reputaba perfecto con arreglo al derecho comun, no siendo por lo tanto obligatorio para el Estado:

3.° Que dispuesta por la ley de 3 de Abril de 1845 y por el concordato celebrado con la Santa Sede, publicado como ley, la aplicacion de estos bienes, variaron por completo su esencia y condiciones;

Y 4.° Que si bien se hallan declarados en venta por la ley de 1.° de Mayo último, ha sido en la forma, modo y con las condiciones marcadas en la misma ley, sin que al poder ejecutivo corresponda hacer escepciones en favor de fincas ó de personas determinadas;

S. M. se ha dignado desestimar la propuesta hecha por V. I., mandando se proceda inmediatamente á la venta de los citados bienes con estricta sujecion á la ley de 1.° de Mayo próximo pasado.»

REAL ÓRDEN DE 10 DE SETIEMBRE DE 1855.

Se dispone que el artículo 215 de la instruccion de 31 de Mayo último quede redactado en la forma siguiente: «Respecto de los bienes pertenecientes al clero no se practicará tasa-

cion, y el tipo de la subasta será la capitalizacion que se gire bajo la base que marca el artículo 114, siempre que se tenga conocimiento exacto de la situacion, cabida y linderos, y de que está echa la division conveniente, ó la finca no es susceptible de ella. En falta de cualquiera de estos datos se procederá en los términos establecidos para la venta de los demás bienes comprendidos en la ley (1).»

REAL DECRETO DE 13 DE SETIEMBRE DE 1855.

«Artículo único. Se declaran en estado de venta y redencion las fincas y censos que corresponden á la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalen, con sujecion á los trámites que disponen la ley de 1.° de Mayo del presente año é instruccion de 31 del mismo, relativas á la desamortizacion.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE FEBRERO DE 1856.

«Conformándose S. M. con lo espuesto por esa Direccion general y con lo informado por el Tribunal contencioso-administrativo, se ha servido derogar el art. 215 de la instruccion de 31 de Mayo del año último, disponiendo que en la tasacion y venta de los bienes pertenecientes al clero se observen todos los trámites y formalidades establecidas para la enajenacion de los de diversa procedencia: que en caso de que la corporacion interesada reluse nombrar el perito que la instruccion previene, lo sea de oficio por el juez de primera instancia: que cuando no sea conocida la estension ó demarcacion de las fincas, se instruya espediente al efecto para fijar estas circunstancias, oyendo á las corporaciones interesadas y á las demás que existan en el distrito administrativo, y puedan suministrar noticias que conduzcan á la aclaracion de la verdad; y por último, que conocida la situacion, estension, límites y calidad de las fincas con presencia de los documentos de propiedad ó de los arrendamientos, ó á consecuencia del espediente instructivo, se tasen en la forma establecida, sacándose á subasta por la cantidad mayor de la tasacion ó capitalizacion, segun lo dispuesto en el art. 179 de la instruccion de 31 de Mayo del año último (2).»

LEY DE 15 DE JUNIO DE 1856.

«Art. 3.° Los interesados que no reclamasen la adjudicacion (de los bienes de capellanías colativas) dentro de 20 años, contados desde la publicacion de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho, y se trasmitirá á los siguientes en grado, que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, despues de los que los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Art. 7.° Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones ó cabildos eclesiásticos no hubiere llamamientos á familias ó personas determinadas, patronato activo familiar, los bienes de aquellas fundaciones se entienden comprendidos en la ley de 1.° de Mayo de 1855, así como tambien lo están los adquiridos por las iglesias fuera de las escrituras de fundacion, ó con posterioridad á estas, y con fondos que no estuviesen consignados especialmente en la misma para este objeto.

Art. 8.° Se esceptúan del artículo anterior los beneficios y prebendas de los cabildos eclesiásticos que constituyen la cóngrua sustentacion de sus individuos durante la vida de estos, ó hasta que obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico.»

REAL DECRETO DE 23 DE SETIEMBRE DE 1856.

«Art. 1.° Se suspende, hasta que se resuelva lo que corresponda en la forma conveniente, la venta de los bienes del clero secular devueltos al mismo conforme á la ley de 3 de Abril de 1845.

Art. 2.° El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecucion del presente decreto, del que oportunamente dará cuenta á las Córtes (1).»

REAL DECRETO DE 13 OCTUBRE DE 1856.

«Artículo 1.° Quedan sin efecto todas las disposiciones, de cualquiera clase que sean, que de algun modo deroguen, alteren ó varien lo convenido en el concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo de 1851.

Art. 2.° Por los respectivos Ministerios se me propondrán inmediatamente las medidas oportunas para que tenga desde luego cumplido efecto el presente decreto.»

REAL ÓRDEN DE 3 DE MAYO DE 1859.

«He dado cuenta á S. M de varias reclamaciones interpuestas, respecto de la equivocada inteligencia con que algunos administradores de propiedades y derechos del Estado proceden, exigiendo la realizacion de cargas que pesan sobre la propiedad particular, conocidamente aplicables á cubrir misas, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales; y en su vista, la Reina (q. D. g.), se ha servido resolver que, no estando dichas car-

(1) Véanse en esta seccion las Reales órdenes de 23 de Febrero de 1856, 18 de Junio de 1863 y 24 de Mayo de 1864.

(2) Véanse en esta seccion las Reales órdenes de 18 de Junio de 1863 y 24 de Mayo de 1864.

(1) V. en la seccion anterior la Real órden de 12 de Noviembre de 1856.

gas comprendidas en las leyes de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855 y de 11 de Julio de 1856, ni refiriéndose por consecuencia á ellas las prescripciones de incautacion y recaudacion dictadas para los demás bienes destinados á cubrir las obligaciones del culto y clero general del Estado, se adopten por esa Direccion las medidas conducentes á evitar dicha equivocada inteligencia en que se hallan los agentes provinciales del ramo, previniéndoles que se absteugan de ejercer toda gestion relativa á la recaudacion de las espresadas cargas, cuando conocidamente estén afectas á cubrir obligaciones de misas, sufragios y demás objetos espirituales.»

CONVENIO CELEBRADO CON LA SANTA SEDE EN 25 DE AGOSTO DE 1859, Y PUBLICADO COMO LEY EN 4 DE ABRIL DE 1860.

«Art. 1.° El Gobierno S. M. Católica, habida consideracion á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar á la Iglesia perpétuamente la pacífica posesion de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutacion ni otra especie de enajenacion de los dichos bienes sin la necesaria autorizacion de la misma Santa Sede.

Art. 2.° Queriendo llevar definitivamente á efecto de un modo seguro, estable é independiente el plan de dotacion del culto y clero prescrito en el mismo concordato, la Santa Sede y el Gobierno de S. M. Católica convienen en los puntos siguientes.

Art. 3.° Primeramente el Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitacion ni reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este convenio cualquiera disposicion que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia, no se computarán en la dotacion que le está asignada por el concordato.

Art. 4.° En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S. M. reconoce á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el concordato. Pero habida consideracion al estado de deterioro de la mayor parte de los que aun no han sido enajenados, á su difícil administracion y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotacion del clero incierta y aun incóngrua, el Gobierno de S. M. ha propuesto á la Santa Sede una permutacion, dándose á los obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel, en cambio de todos ellos y mediante su cesion hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.

Art. 5.° La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente á efecto una dotacion cierta, segura é independiente para el culto y para el clero, oidos los obispos de España y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutacion se realice en la forma siguiente.

Art. 6.° Serán eximidos de la permutacion y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada diócesis, todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 del concordato de 1851, á saber: los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos. Tambien se les reservarán las casas destinadas á la habitacion de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de *iglesarios*, *mansos* y otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos, y las bibliotecas y casas de correccion ó cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el dia para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitacion del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen á tales objetos.

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotacion prescrita para el culto y clero en el concordato.

En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce á la Santa Sede á admitir la espresada permutacion de valores, si en alguna diócesis estimare el Obispo que por particulares circunstancias conviene á la Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutacion, imputándose el importe de su renta en la dotacion del clero.

Art. 7.° Hecha por los obispos la estimacion de los bienes sujetos á la permutacion, se entregarán inmediatamente á aquellos títulos ó inscripciones intransferibles, así por el completo valor de los mismos bienes como por el valor venal de los que han sido enajenados despues del concordato. Verificada la entrega, los obispos, competentemente autorizados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesion de todos los bienes que con arreglo á este convenio están sujetos á la permutacion.....

Art. 10. Los bienes pertenecientes á capellanías colativas y á otras semejantes fundaciones piadosas familiares, que á causa de su peculiar índole y destino de los diferentes derechos que en ellos radican no pueden comprenderse en la permutacion y cesion de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y S. M. Católica.

Art. 11. El Gobierno de S. M., confirmando lo estipulado en el art. 39 del concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que de comun acuerdo se convenga, por razon de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporcion con las mismas cargas. Tambien se compromete á cumplir por su parte en términos hábiles las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho artículo.

Se instituirá una comision mista con el carácter de consultiva que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este artículo, y proponga la cantidad alzada que en razon de ellas ha de satisfacer el Estado.

Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultan á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de S. M. Católica, ha acordado estender, como de hecho estiende, el benigno saneamiento contenido en el artículo 42 del concordato á los bienes eclesiásticos enajenados á consecuencia de la referida ley de 1.° de mayo de 1855.

Art. 21. El presente convenio, adicional al solemne y vigente concordato celebrado en 16 de Marzo de 1851, se guardará en España perpétuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho concordato.»

REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1860.

Por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y con el Nuncio Apostólico, se decretaron las disposiciones oportunas para la ejecucion del convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, dictándose reglas para los inventarios y estimacion de los bienes eclesiásticos, objeto de dicho convenio, hasta llevar á efecto la permutacion de los mismos por inscripciones intransferibles del 3 por 100, quedando en su virtud como bienes del Estado para proceder á su venta. El art. 11 de dicho decreto dice así: «Terminado el espediente de estimacion de bienes sujetos á la permutacion, se ordenará la emision y entrega á los respectivos prelados de inscripciones intransferibles de la renta consolidada al 3 por 100 por el completo valor de dichos bienes no enajenados. Verificada la entrega de las inscripciones, los Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos harán al Estado formal cesion de los bienes espresados en la forma que previene el art. 7.° del convenio espresado.»

REAL ÓRDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1860.

«Enterada la Reina (q. D. g.) de la comunicacion del Cardenal Arzobispo de Sevilla al Gobernador de la misma ciudad, sobre que se le faciliten los fondos necesarios para hacer la tasacion de los bienes pertenecientes al clero sujetos á permutacion, y en vista de las dificultades que habrian de esperimentarse para el cumplimiento del último convenio celebrado entre S. S. y S. M. C. por la minuciosidad y gastos que aquella operacion requiere; y atendiendo á que con tan inevitable dilacion sufrirán grave perjuicio los intereses de la Iglesia y del Estado, viéndose además este en un conflicto por no tener consignada para aquel servicio cantidad alguna en los presupuestos generales; y que siendo ya punto convenido entre ambas Potestades que la capitalizacion de las fincas ha de hacerse, por regla general, tomando como base el producto que tuvieron en el último quinquenio, se ha dignado resolver S. M. se manifieste á V. E., como de Real órden lo ejecuto, la conveniencia de que se circulen por esa Nunciatura á los Reverendos Arzobispos y Obispos las órdenes oportunas, indicándoles las razones que existen sobre la materia, á fin de que no opongan obstáculos, y antes bien coadyuven á que la capitalizacion de las fincas se haga de la manera propuesta, sin perjuicio de que en aquellas que por motivos especiales fuese necesaria la tasacion pericial, se practique esta, autorizándose competentemente en tales casos á las administraciones de propiedades y derechos del Estado en las provincias.»

REAL ÓRDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1860.

«He dado cuenta á S. M. de la instancia del Reverendo Obispo de Tuy sobre que tenga debido cumplimiento el convenio celebrado últimamente con Su Santidad en la parte relativa á los bienes conocidos con el nombre de iglesiarios, mansos y otros, sin que se le imputen en la dotacion del clero; y en su vista, la Reina (q. D. g.) se ha servido resolver se prevenga á los administradores de propiedades y derechos del Estado no comprendan entre los bienes permutables aquellos que las juntas diocesanas no hubiesen imputado en la dotacion á los párrocos, y que se comprendan como permutables los que habian sido objeto de imputacion en cuenta del haber, distinguiéndolos de los demás permutables para que en su dia pueda resolverse sobre unos y otros lo correspondiente, si por la parte del clero se hicieren reclamaciones.»

REAL ÓRDEN DE 8 DE DICIEMBRE DE 1860.

Se resuelve, que los bienes de encomiendas provistas pertenecientes á la órden de San Juan de Jerusalen, como comprendidos en las leyes de 1.° de Mayo de 1555 y 11 de Julio de 1856, deben ser enajenados desde luego, sin perjuicio de acordarse los términos en que deban estenderse las inscripciones con que hayan de ser reintegrados los poseedores de aquellas.

LEY DE 7 DE ABRIL DE 1861.

Artículo 1.° Los bienes de la Iglesia que el Estado tiene derecho á adquirir por efecto de la permutacion acordada en el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, continuarán enajenándose de esta manera: las fincas rústicas y urbanas con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, y los censos segun la de 11 de Marzo de 1859.

Art. 5.° De los títulos de la Deuda consolidada que la Junta recoja por compra, ó que se reciban en pago de las ventas como equivalencia del metálico, segun el art. 20 de la ley de 11 de Julio de 1856, se convertirán 900 millones de reales nominales en inscripciones nominativas á favor de la Caja de depósitos. Los demás títulos que se adquieran serán desde luego amortizados.....»

REAL ÓRDEN DE 28 DE MAYO DE 1862.

Se resuelve, que en las diócesis en que se lleve á efecto la enajenacion de los bienes del clero, se proceda á la aprobacion y adjudicacion de los remates que quedaron pendientes al suspenderse la venta de dichos bienes por el Real decreto de 23 de Setiembre de 1856, concediéndose á los interesados el plazo de un mes para admitirlos ó rechazarlos, en igual forma que lo dispuso la Real órden de 13 de Enero de 1859 acerca de los bienes desamortizables de distinta procedencia.

REAL ÓRDEN DE 18 DE JUNIO DE 1863.

«He dado cuenta á la Reina (g. D. g.) del espediente formado á instancia del comisionado principal de ventas de la provincia de Zaragoza, con motivo de las dificultades que presenta la tasacion de las fincas procedentes del clero, atendida la corta estension de su mayor parte y escesivo fraccionamiento en que se hallan en diferentes territorios: y en su vista;

Considerando que por dicha causa seria un trabajo inútil tasar indistintamente todas las fincas con arreglo á la tarifa vigente por cuanto ya resultan suficientemente identificadas en los inventarios de permutacion y con rentas fijas y ciertas:

Considerando, que en su virtud puede servir de tipo para la primera subasta la capitalizacion que se le señale segun su renta y bases de la ley, y para la segunda, en caso necesario, con rebaja de cinco por ciento;

S. M., conformándose con el dictámen del Consejo de Estado y el de esa Direccion general, se ha dignado resolver quede derogada la Real órden de 23 de Febrero de 1856 que mandó tasar todas las fincas del clero; que se ponga en vigor la de 10 de Setiembre de 1855, segun la cual solo debian serlo aquellos cuyos linderos y cabida fuesen desconocidos ó no constase si eran susceptibles de division; pero modificada en el sentido de que, además de las que se hallen en el primero de los dos casos indicados, se tasen tambien las urbanas todas, las rústicas cuya estension esceda de 20 hectáreas en terreno de regadío y de 100 en las de secano, y además aquellas cuyo arrendamiento sea anterior al año 1800; y en que no se tasen las fincas de que no conste si son susceptibles de division, por que debiendo sugetarse á tasacion precisamente las de más de 20 y 100 hectáreas, segun su clase, en ella ha de resultar si son divisibles; y las que no lleguen á dichas medidas, es indiferente que lo sean ó nó, por cuanto deben suponerse de menor cuantía y estas no pueden subdividirse segun la Real órden de 22 de Julio de 1859.

Al propio tiempo se ha dignado mandar S. M. que las fincas del clero, que segun las prescripciones anteriores, no deben tasarse, salgan á primera subasta por el tipo de capitalizacion, segun su renta y bases de la ley: y cuando por falta de postores haya de celebrarse segunda licitacion, se verifique ésta por aquel mismo tipo, pero con rebaja de cinco por ciento de su importe.»

REAL ÓRDEN DE 24 DE MAYO DE 1864.

«.....S. M. conformándose con el dictámen de la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, y el de esa Direccion general, se ha dignado mandar:

1.° Se aprueba la práctica que ha venido siguiéndose de hacer estensiva á las fincas del clero la segunda tasacion que se dispuso para las de corporaciones civiles en la Real órden de 8 de Octubre de 1858.

2.° En las fincas en que tengan ó hayan tenido lugar dos tasaciones, será de cargo del comprador el pago de la última, y del Estado la primera.

3.° En las que solo haya mediado una tasacion, será de cargo del comprador con arreglo á instruccion.

Y 4.° El importe de los pagos que hayan de hacerse por el Estado en este concepto, así como el abono de los anticipos ya hechos por las provin-

cias antes de ahora, se considerarán como minoracion de ingresos del ramo para todos los efectos de las respectivas leyes de presupuestos.»

REAL ÓRDEN DE 24 DE AGOSTO DE 1865.

Habiendo fallecido el Srmo. Sr. Infante Don Francisco de Paula Antonio, se ordena que la Direccion general de propiedades se incaute inmediatamente en nombre del Estado de todos los bienes pertenecientes á las diversas encomiendas de las órdenes militares que aquel usufructuaba, á fin de que se proceda á su enajenacion segun lo prevenido en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856.

CONVENIO CELEBRADO CON LA SANTA SEDE EN 16 DE JUNIO DE 1867 SOBRE CAPELLANÍAS COLATIVAS, PUBLICADO COMO LEY EL 24 DEL MISMO MES.

«Artículo 22. No son objeto de este convenio por su índole especial las comunidades de beneficiados de las diócesis de la corona de Aragon, en las cuales no se hará novedad hasta el arreglo parroquial, ó bien que entre ambas potestades se celebre acerca de ellas otro convenio especial; pero los bienes, censos y demás derechos reales, que constituyen su dotacion, se conmutarán en la forma que prescribe el convenio de 25 de Agosto de 1859, adicional al concordato de 1851 en inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, que se entregarán á la respectiva comunidad á que pertenecen los bienes. ...»

INSTRUCCION DE 25 DE JUNIO DE 1867 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO ANTERIOR.

«Art. 55. Los prelados de las diócesis de la antigua corona de Aragon remitirán á la mayor brevedad posible al Ministerio de Gracia y Justicia, para el uso correspondiente, nota debidamente circunstanciada: primero, de los bienes, derechos y acciones de que todavía se hallen en posesion las comunidades de beneficiados coadjutores: segundo, de los que se haya incautado el Estado de esta misma procedencia y su fecha, espresando si existen ó no reclamaciones pendientes, fecha de ellas y dependencia del Estado en que existan los espedientes de reclamacion.

Art. 56. La entrega al Estado, á la cual deberá preceder la cesion canónica del diocesano, de los bienes existentes todavía en poder de las comunidades, no se verificará hasta tanto que se fije, con intervencion y acuerdo de la correspondiente administracion de propiedades del Estado, la renta que actualmente produce cada finca ó censo, y en su consecuencia se espidan á favor de las propias comunidades las correspondientes inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta igual á la prefijada, que se entregarán al mismo prelado.

Art. 57. Antes de anunciarse por el Estado la venta de los bienes de dichas comunidades que todavía conserva el mismo Gobierno en su poder sin enajenar, se espedirán las inscripciones intransferibles correspondientes.»

DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE 12 DE OCTUBRE DE 1868.

«En uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno provisional, de conformidad con el mismo y como Ministro de Gracia y Justicia, vengo en acordar la supresion en la Península é islas adyacentes de la órden regular llamada Compañía de Jesus, cerrándose en el término de tres dias todos sus colegios é institutos con ocupacion de temporalidades, á cuyo efecto se comunicarán por quien corresponda las órdenes oportunas á las autoridades de las provincias donde se encuentran aquellos establecimientos.

En la ocupacion de temporalidades se comprenden todos los bienes y efectos de la órden, así muebles como raices, edificios y rentas, que pasarán á formar parte del caudal de la Nacion, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Julio de 1835.....»

DECRETO DE ID. DE 18 DE OCTUBRE DE 1868.

«Artículo 1.° Quedan estinguidos desde esta fecha todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados en la Península é islas adyacentes desde 29 de Julio de 1837 hasta el dia.

Art. 2.° Todos los edificios, bienes raices, rentas, derechos y acciones de las casas de comunidad de ambos sexos, suprimidas por el artículo anterior, pasarán á ser propiedad del Estado.

Art. 5.° Todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas que quedaron subsistentes por la ley de 29 de Julio de 1837, se reducirán en cada provincia á la mitad.....»

ÓRDEN DE ID. DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1868.

«El Gobierno provisional, por un decreto fecha 12 del mes próximo pasado, inserto en la *Gaceta* del dia anterior, acordó la supresion en la Península é islas adyacentes de la órden regular llamada Compañía de Jesús, y la ocupacion de todos sus bienes raices y muebles, que pasarian á formar parte del caudal de la Nacion.

Por otro decreto del 18 se declararon estinguidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados desde 29 de Julio da 1837

en adelante; se mandaron reducir á la mitad los conventos y demás casas de religiosas que quedaron subsistentes por la ley del citado año de 1837, y que los edificios y bienes de las comunidades suprimidas pasaran á ser propiedad del Estado.

Y es además notorio, que algunas juntas revolucionarias, por consideraciones de interés local ó de órden público, acordaron la demolicion de varios edificios que venia poseyendo el Estado ó de que era propietario.

Urge, pues, en vista de estas disposiciones, adoptar las que conduzcan á que los referidos bienes aumenten el caudal desamortizable, y por consiguiente los recursos con que poder hacer frente á las necesidades del Tesoro público.

Con tal propósito, y el de que la ocupacion de los bienes se lleve á efecto con la debida regularidad, el Gobierno provisional se ha servido disponer lo siguiente:

Art. 1.° Los gobernadores de provincia facilitarán á los administradores de Hacienda pública, sin pérdida de tiempo, relacion de los colegios é institutos de la Compañía de Jesús, y de los conventos y casas de religiosas que deben suprimirse, en virtud de los decretos del Gobierno provisional de 12 y 18 del mes próximo pasado.

Art. 2.° Recibida que sea la espresada relacion por los administradores, procederán á tomar posesion y formar inventarios de los bienes correspondientes á las comunidades y casas religiosas suprimidas; y cuando no puedan hacerlo por sí mismos, delegarán sus facultades, comisionando para este objeto á subalternos de su confianza en las capitales de provincia, á los administradores de propiedades del Estado y á los de rentas estancadas, en las poblaciones donde existan estos funcionarios, y á los alcaldes en los demás pueblos.»

En los restantes artículos se dan reglas para la formacion de inventarios de los bienes de que se trata y para que la administracion de Hacienda pública se haga cargo de ellos y de sus frutos y rentas, como tambien de los solares de las iglesias y conventos derribados.

DECRETO DEL REGENTE DEL REINO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1869.

«Artículo 1.° El Ministro de Hacienda adoptará las medidas convenientes para que las administraciones económicas de las provincias, enclavadas en el territorio de la antigua corona de Aragon, se incauten desde luego de los bienes de las comunidades de beneficiados en ellas existentes, y para que procedan inmediatamente á su enajenacion, sin perjuicio de que tan pronto como sea conocida la verdadera renta que producian, se expidan en su equivalencia las correspondientes inscripciones intransferibles de la Deuda del 3 por 100 consolidado, segun está prevenido.....»

SECCION III.

Leyes y disposiciones sobre venta de montes públicos.

REAL ÓRDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1851.

Se mandó proceder á la enajenacion de los montes procedentes de comunidades religiosas de varones, imponiéndose á los compradores la obligacion de conservar el arbolado y de hacer las cortas periódicas con sujecion á las leyes y ordenanzas de montes y plantíos.

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE VENTAS DE 4 DE JUNIO DE 1855.

Se encarga á los gobernadores de provincia que hasta que produzcan su natural resultado los trabajos forestales que ocupan al Ministerio de Fomento, y no obstante lo que por punto general se establece en la instruccion de 31 de Mayo de 1855 para la ejecucion de la ley de 1.° del mismo mes, suspendan poner en venta ningun monte del Estado, de los pueblos, de los establecimientos públicos de beneficencia, instruccion y demás procedencias de bienes nacionales, hasta que se determine con este objeto el reglamento especial oportuno, ó la disposicion que se considere más acertada.

REAL DECRETO DE 26 DE OCTUBRE DE 1855.

«Artículo 1.° Para los efectos prevenidos en el artículo 2.° de la ley de 1.° de Mayo último, se dividen los montes y bosques del Estado, de los propios y comunes y los de los establecimientos públicos en las tres clases siguientes:

Primera. Montes que deben conservarse sujetos á las ordenanzas del ramo, y que se esceptúan por tanto de la enajenacion.

Segunda. Montes de enajenacion dudosa.

Tercera. Montes que se declaran desde luego en estado de venta.»

En los demás artículos se determinan los montes que corresponden á cada una de dichas tres clases, y el espediente que ha de instruirse para que por el Ministerio de Fomento se declare si procede ó no la enajenacion de los comprendidos en la segunda clase, y como ha de verificarse la entrega de ellos y de los de la tercera á la Direccion de ventas de bienes nacionales para que que se proceda á la enajenacion de los mismos.

REAL DECRETO DE 27 DE FEBRERO DE 1856.

«Artículo 1.° Se declaran en estado de venta con la reserva que se dirá en el art. 5.°, prévias las formalidades que señalará al art. 2.°, y bajo las

condiciones de garantía que exige el art. 147 y posteriores de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, todos los montes y bosques que no se hallen comprendidos en las especies siguientes, á saber: los abetos, pinabetes, pinsapos, pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, castaños, avellanos, abedules, alipos, acebos, robles, rebollos, quejigos, y picornos, determinándose la clasificacion por la especie que predomine, y cualesquiera que sean sus métodos de beneficio, y la localidad donde se hallaren.

Art. 2.° Antes de procederse á anunciar la subasta de los montes, se oirá por los gobernadores á los ingenieros ó comisarios respectivos, los cuales, en el breve plazo que se les designe, manifestarán, en virtud de los datos que posean, y en su defecto del reconocimiento que practiquen ó hagan practicar á los peritos agrónomos, si el monte pertenece á la clase reservable ó no: en el primer caso no se anunciará la subasta; en el segundo se anunciará y procederá á ella: en caso de duda se consultará al Ministerio de Fomento para la resolucion que convenga.

Art. 3.° Para proceder con actividad y acierto en la resolucion de los espedientes de montes ya subastados, y cuya adjudicacion se halla pendiente, los gobernadores pasarán á los ingenieros ó comisarios respectivos nota de los que se hallen en aquel caso, y estos evacuarán su informe en el breve plazo que les señale el gobernador; de forma que en el término de un mes á lo sumo (salvo los casos de imposibilidad absoluta por el escesivo número de fincas y escasez de personal) se hallen todos los informes en la Direccion general de ventas de bienes nacionales.

Art. 4.° Para pedir y evacuar los informes serán preferidos: 1.° Los montes ya subastados y pendientes de adjudicacion. 2.° Aquellos cuya subasta esté solicitada. 3.° Aquellos cuya subasta se pretenda en lo sucesivo.

Art. 5.° Además de esceptuarse de la enajenacion los montes cuyas especies se designan en el art. 1.°, el gobierno se reserva declarar no enajenable alguna de las demás especies, cuando por razones graves lo juzgue conveniente al interés público, cuidando de comunicarlo al gobernador que corresponda, ya para que no anuncie la subasta, ya para que se abstenga de adjudicarle. Anunciada la subasta, y llegado el momento de la adjudicacion sin recibir las órdenes correspondientes para que se suspenda, se procederá á ella con las formalidades prevenidas.»

REAL ÓRDEN DE 6 DE MARZO DE 1856.

Por el Ministerio de Fomento se dictan las disposiciones oportunas para la clasificacion de los montes con arreglo al Real decreto de 27 de Febrero anterior, á fin de que no sufra dilaciones ni entorpecimientos de ninguna clase la venta de los destinados á la enajenacion.

REAL DECRETO DE 16 DE FEBRERO DE 1859.

Contiene varias disposiciones para la clasificacion y venta de los montes del Estado, de los pueblos y de los establecimientos públicos. No se insertan, como tampoco las dictadas para su ejecucion, porque todas fueron derogadas por el artículo 4.° del Real decreto que sigue.

REAL DECRETO DE 22 DE ENERO DE 1862.

«Artículo 1.° De la venta prescrita por el artículo 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, quedan esceptuados, en cumplimiento del art. 2.° de la misma, los montes cuya especie arbórea dominante sea el pino, el roble ó el haya.

Art. 2.° Los escepciones contenidas en el anterior artículo no comprenden sino los montes que consten, lo menos, de 100 hectáreas.

Para calcular si tienen esta medida, se acumularán los que disten entre sí menos de un kilómetro.

Art. 3.° Se formará, para facilitar el mejor servicio, un catálogo espresivo de los montes que resulten, segun estas reglas, esceptuados de la desamortizacion.

Todos los demás quedan desde luego en estado de venta. Cualquier duda que ocurra, antes ó despues de hecho el catálogo, sobre si un terreno es de los que deberá comprender ó de los ya comprendidos en él, será resuelta con arreglo á lo que disponen los anteriores artículos.

Art. 4.° Quedan derogadas las disposiciones del Real decreto de 16 de Febrero de 1859 y las demás dictadas para su ejecucion, sin que en ellas puedan fundarse reclamaciones respecto de montes que ya estén vendidos; pero quedarán sin efecto las ventas que desde la fecha de este Real decreto se intentaren contra lo que en el mismo se prescribe....»

REAL ÓRDEN DE 22 DE ENERO DE 1862.

«Para el cumplimiento y ejecucion del Real decreto de esta fecha sobre desamortizacion de los montes públicos, S. M. la Reina se ha servido disponer se observen las reglas siguientes:

1.° En virtud de dicho Real decreto, solo quedan esceptuados de la venta, con arreglo al artículo 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, los montes cuya especie arbórea dominante sea el pino, el roble ó el haya, y que cubran una estension lo menos de 100 hectáreas.

2.° Todos los terrenos que no contengan pino, roble ni haya, quedan desde luego en estado de venta, sin necesidad de mas trámites ni decla-

raciones por parte del Ministerio de Fomento ó sus dependencias.

3.ª Los terrenos que contengan alguna de las tres especies de árboles espresados, podrán tambien ser vendidos, prévio informe del ingeniero de montes que certifique que ninguna de las tres es dominante en él, ó que la estension de la finca no llega á 100 hectáreas.

4.ª Como muchas veces la subdivision de los montes hace aparecer, en las relaciones estadísticas y en dictámenes periciales, como muy pequeños los que en realidad no son sobre el suelo del país sino parte de una masa mas considerable de vejetacion forestal, solo se entenderá que un terreno de monte ocupa menos de 100 hectáreas cuando no se obtenga esa estension añadiendo á la suya la de todo otro que, dentro de la distancia de un kilómetro, esté poblado de pinos, robles ó hayas.

5.ª Si por alguna oficina ó interesado se suscitare duda sobre la exactitud del dictámen del ingeniero en los casos en que es necesario, segun las dos reglas anteriores, para proceder á la venta, el gobernador de la provincia volverá á oir á éste, y dispondrá si le pareciere oportuno, y si antes no se hubiese ya hecho, que vaya á reconocer personalmente el monte.

6.ª Tanto en su primera certificacion, como en los casos en que sea necesaria la segunda ó el reconocimiento personal, el ingeniero se limitará á hacer constar la especie dominante, la cabida del monte y su distancia de los mas próximos, prescindiendo de toda otra circunstancia y consideracion.

7.ª Si despues del segundo dictámen del ingeniero continuara habiendo disidencia entre su opinion y la de la oficina ó interesado que hubiere reclamado, se remitirá el espediente á la resolucion de este Ministerio.

8.ª Radicando en el de Hacienda y sus dependencias el conocimiento de las cuestiones relativas á los montes que han de quedar esceptuados de la venta por ser de aprovechamiento comun, ó como dehesas destinadas al ganado de labor, quedarán sin curso todas las solicitudes ó reclamaciones que en este concepto se dirijan al de Fomento.

9.ª Lo quedarán asimismo las que se refieran á ventas de montes que no contengan ninguna de las tres especies esceptuadas.

10. Tampoco se admitirán las relativas á ventas verificadas antes de esta fecha, aun cuando las fincas volviesen á ser anunciadas en subasta por quiebra de sus anteriores compradores.

11. Si por el ingeniero, la seccion de Fomento ó cualquier interesado se reclamare contra el espediente de venta de algun monte que contenga pinos, robles ó hayas, y respecto del cual no se hubiere procedido como marcan las reglas 3.ª y siguientes, el gobernador dispondrá que no se haga el anuncio de subasta, ó que quede nulo si ya se hubiese hecho su publicacion; y en el caso de estar celebrado el remate, dará parte inmediatamente, para los efectos oportunos, á la Direccion general de propiedades y derechos del Estado, y á la de agricultura, industria y comercio.

12. Los ingenieros y las secciones de Fomento procurarán que sus reclamaciones, siempre que procedan, se hagan con la prontitud debida, á fin de evitar los malos efectos de la suspension de una subasta anunciada, ó de la anulacion de un remate, y serán responsables ante el Ministerio de Fomento cuando omitan presentar las que sean justas.

13. El ingeniero que se halle al frente del servicio del ramo en cada provincia, formará un catálogo de los montes que por el Real decreto de hoy quedan en la misma esceptuados de la venta..

(En los artículos 14 al 18 se dan reglas para la formacion de dicho catálogo de los montes.)

19. El objeto del catálogo es únicamente el de facilitar el servicio y formar la base de la estadística del ramo de montes en lo sucesivo.

Si por omision dejase de incluirse en él un monte que por el Real decreto de hoy deba quedar esceptuado, no por eso pasará á la clase de enajenable; y si por error contuviera la designacion de alguno que no deba esceptuarse, no por eso dejará de ser vendible.

20. Sin embargo, no podrá procederse á la venta de un monte espresamente designado entre los del catálogo sino despues que en vista de la competente reclamacion decrete este Ministerio (el de Fomento) escluirlo de él.»

REAL ÓRDEN DE 22 DE SETIEMBRE DE 1862.

.....«S. M. se ha dignado declarar: primero, que las ventas anuladas por haberse verificado contraviniendo á la legislacion sobre desamortizacion de montes que rigió hasta 22 de Enero último, no han convalecido por haber sido derogada dicha legislacion por el Real decreto de esta última fecha, y que en su consecuencia debe quedar subsistente la espresada anulacion y verificarse nueva venta de dichas fincas; y segundo, que esta resolucion sirva de regla para todos los interesados que puedan hallarse en igual caso.»

LEY DE 24 DE MAYO DE 1863.

«Art. 1.º Los montes públicos, para los efectos de esta ley, se dividen en las dos clases siguientes:

Primera. Montes del Estado.

Segunda. Montes de los pueblos y de los establecimientos públicos.

Art. 2.º Quedan esceptuados de la venta pres-

crita por el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 los montes públicos de pinos, robles ó hayas, cualesquiera que sean sus especies, siempre que consten lo menos de 100 hectáreas.

Para computar esta cabida se acumularán los que dicten entre sí menos de un kilómetro.

Art. 6.° Cuando pertenezca á un particular el suelo de un monte esceptuado de la venta, cuyo vuelo sea del Estado ó de algun pueblo ó establecimiento público, se refundirán los dos dominios, indemnizando préviamente al particular.....

Artículos adicionales. 1.° Por las disposiciones de esta ley no se alteran las de las anteriores, que esceptúan de la desamortizacion los terrenos y montes de aprovechamiento comun, y las dehesas destinadas al ganado de labor.

2.° El gobierno hará una clasificacion especial de los montes públicos de la provincia de Canarias, que han de quedar esceptuados de la venta prescrita en el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855.....»

REGLAMENTO DE 17 DE MAYO DE 1865, PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE 24 DE MAYO DE 1863.

«Art. 1.° Para los efectos de la ley de 24 de Mayo de 1863, se reputan montes públicos, no solo los del Estado, los de los pueblos y corporaciones que dependen del Gobierno, esceptuados de la desamortizacion en virtud de lo dispuesto en la misma ley y en las de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, sino tambien los que, declarados enajenables, no hayan pasado todavía á dominio particular.

Art. 2.° Con arreglo al art. 4.° de los adicionales á la misma ley de 24 de Mayo de 1863 y en armonía con lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 é instrucciones dictadas para su cumplimiento, se formará un catálogo que comprenda con distincion los montes que sean propiedad del Estado en cada provincia y los que pertenezcan á pueblos ó establecimientos públicos.

En este catálogo se comprenderán tan solo los montes esceptuados de la venta, ó sean los de pinos, robles ó hayas, siempre que por sí solos, ó unidos á otros que disten menos de un kilómetro entre sí, consten al menos de 100 hectáreas.

Art. 16. Quedan esceptuados en la provincia de Canarias de la venta prescrita por el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, conforme á la autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 24 de Mayo de 1863, los montes públicos de pinos, fayas, laureles y brezos, siempre que consten lo menos de 100 hectáreas.....»

LEY DE PRESUPUESTOS DE 20 DE MAYO DE 1868.

«Art. 12. Se autoriza al Gobierno para que proceda desde luego á la venta de los montes del Estado esceptuados de la desamortizacion, reservando solamente los que tengan reconocida importancia por declaracion facultativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con los de Hacienda y Marina. La venta de estos bienes se verificará con las mismas formalidades que establece la ley é instrucciones para la desamortizacion, con la sola diferencia de que el precio del remate se realizará en cinco plazos iguales: el primero al contado y los demás en cada uno de los cuatro años sucesivos, abonándose el interés máximo de 6 por 100 al año á los compradores que anticipen uno ó más plazos.»

SECCION IV.

Disposiciones para la venta de las fábricas de salitre, azufre y pólvora.

LEY DE 17 DE JUNIO DE 1864.

«Art. 4.° Se autoriza al Gobierno para enajenar en pública subasta las fábricas de salitre, azufre y pólvora, con cuanto á ellas pertenezca. Los terrenos y cotos de las mismas fábricas quedarán comprendidos en las disposiciones generales vigentes sobre desamortizacion de los bienes del Estado.....

Art. 5.° Se esceptúan de la venta las fábricas civiles de pólvora y salitres que se consideren necesarias para el servicio de guerra, haciéndose entrega de ellas al departamento del ramo, terminado el servicio á que se refiere el art. 2.°

Art. 6.° Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las disposiciones convenientes para la ejecucion de la presente ley.....»

REAL ÓRDEN DE 24 DE SETIEMBRE DE 1867.

«Visto el espediente instruido con objeto de establecer las bases para proceder á la venta de las fábricas de pólvora y materias esplosivas de que se han incautado las dependencias de este Ministerio en virtud de lo dispuesto en la Real órden de 10 de Junio de 1865, el dictámen de la Asesoría general y el de la seccion de Hacienda del Consejo de Estado; la Reina (q. D. g.) se ha servido resolver que se proceda á la venta de las mencionadas fábricas bajo las reglas y condiciones siguientes:

1.° La subasta se anunciará por el valor en que han sido apreciados los edificios, máquinas, enseres, terrenos y demás pertenencias de cada fábrica segun el inventario que se unirá por cabeza del espediente, y no se admitirá postura menor de la espresada cantidad.

2.° El remate se anunciará con tres meses de anticipacion, y se verificará el dia que se señale,

desde las doce á la una de la tarde, simultáneamente en esta córte, en la capital de la provincia y en la del partido donde radique la fábrica, ante el juez de Hacienda, comisionado de ventas y escribano del mismo juzgado. Si el valor de la finca no escediese de 2,000 escudos, únicamente se celebrarán dos remates, en la capital de la provincia y en la cabeza del partido.

3.° Terminados los remates, se elevarán los espedientes por el primer correo á la Direccion general, para que por la Junta superior de ventas se haga la adjudicacion al mejor postor en la forma correspondiente.

4.° El precio del remate de las fincas de mayor cuantía será satisfecho en 15 plazos y 14 años, segun previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855. El primer plazo debe pagarse dentro de los 15 dias siguientes al de notificarse la adjudicacion, y los restantes á su vencimiento con el intervalo de un año cada uno. Los compradores podrán anticipar el pago de uno ó más plazos, en cuyo caso se les abonará el interés máximo de 5 por 100 al año, correspondiente á cada anticipo. Pero las fincas de menor cuantía, ó sean las que no escedan de 2,000 escudos en su valor, se pagarán en 20 plazos iguales y en 19 años; y á los que anticipen uno ó mas plazos no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual.

5.° El comprador podrá satisfacer, si le conviene, el 50 por 100 del precio del remate en títulos de la Deuda consolidada ó diferida, admitiéndosele por el cambio medio del valor á que se cotice el dia anterior al en que deba realizar el plazo, conforme á lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la ley de 11 de Julio de 1856.

6.° Antes de realizar el pago del primer plazo, el comprador prestará una fianza equivalente á la mitad del importe del remate, la cual podrá constituirse en metálico, en títulos de la Deuda consolidada ó diferida regulados por el interés que gocen, al tipo comun de 100 escudos efectivos por cada 6 escudos de renta ó interés anual; en acciones de carreteras ú obligaciones del Estado por subvencion á ferro-carriles, por su valor nominal, ó en fincas rústicas ó urbanas que radiquen en España, cuyo valor se fijará capitalizándolas al tipo de 4 por 100 sobre el valor en renta por que resulten amillaradas para el pago de la contribucion territorial.

7.° Si esta fianza, que no se alzará hasta que la Hacienda reciba el total importe de los plazos, se prestase en papel, habrá de acreditarse que éste ha sido adquirido en Bolsa con las formalidades necesarias para impedir su reivindicacion, segun la ley de 31 de Marzo de 1861.

8.° En el caso de afianzarse en fincas, si el rematante fuere una sociedad extranjera, se exigirá que el fiador sea un particular; y de todos modos se habrá de exigir al fiador que acompañe los títulos de propiedad y certificacion del registro respectivo, para acreditar la libertad de las fincas; que renuncie espresamente los beneficios que le correspondan segun las leyes, constituyéndose principal pagador; que en el caso de ser casado, se obligue la mujer á no deducir contra su marido demanda de tercería por razon de dote, parafernales ú otros cualesquiera bienes que puedan corresponderle para hacer ineficaz la accion del Estado, precediendo la licencia del marido y juramento de la mujer de no haber sido violentada para el contrato; y por último que se inscriba la escritura en el registro correspondiente, conforme á lo prevenido en la ley Hipotecaria. Estas mismas circunstancias se exigirán cuando el comprador preste la fianza con bienes propios; y tanto éste, como el fiador en su caso, deberán renunciar cualquiera fuero que les corresponda, sometiéndose á las autoridades administrativas y tribunales contencioso-administrativos españoles en todas las cuestiones que puedan suscitarse con relacion á estas ventas.

9.° Las fianzas serán aprobadas por los gobernadores de provincias prévio informe de las administraciones de Hacienda y de los promotores fiscales respectivos; correspondiendo á los mismos gobernadores acordar la cancelacion cuando haya recibido la Hacienda el precio del remate.

10. Al entregar el comprador el primer plazo otorgará pagarés obligándose al pago de los restantes.

11. El pago del primer plazo y la aprobacion de la fianza dará derecho al comprador para entrar en la posesion de la fábrica y las pertenencias que haya rematado, la cual recibirá en la forma que establecen las leyes. Este derecho lo perderá el comprador por insolvencia de cualquiera de los plazos sucesivos, quedando sujeto á la responsabilidad que corresponda y pudiendo venderse nuevamente la finca por el Estado desde el momento en que uno ó mas plazos no fuesen oportunamente satisfechos.

12. Serán de cuenta del comprador los gastos del espediente hasta la toma de posesion, así como los derechos de tasacion que deban abonarse á los arquitectos y agrimensores que hubiesen apreciado las fábricas, en el caso de no haber sido valoradas éstas por los oficiales del cuerpo de artillería.

13. En los demás trámites se observarán las reglas generales establecidas para llevar á efecto la desamortizacion, considerándose estas fincas como procedentes del Estado.....

15. Y últimamente, para que estas ventas tengan toda la publicidad que exigen las especiales circunstancias de las propiedades de que se trata, cuidará la Direccion de que con la anticipacion necesaria se remita á este Ministerio suficiente

número de ejemplares de cada anuncio de subasta, á fin de que se dirijan al de Estado, y por éste á los cónsules en el estranjero, para que les den toda la publicidad que sea posible.»

SECCION V.

Leyes relativas á la venta de salinas y minas del Estado (1).

LEY DE 16 DE JUNIO DE 1869.

«Art. 3.° Se declaran en estado de venta las salinas de la Hacienda y las demás fincas y efectos pertenecientes á las mismas, que se hallen aplicados esclusivamente al servicio de la renta.

El pago de las salinas vendidas se verificará en metálico, entregando los compradores la décima parte al verificarse la adjudicacion, y el resto por partes iguales en los nueve años siguientes.

Las ventas se harán en pública licitacion.

Esceptúanse por ahora de la venta las salinas de Torrevieja, Imon y los Alfaques.....»

LEY DE PRESUPUESTOS DE 8 DE JUNIO DE 1870.

«Art. 4.° Se autoriza al Ministro de Hacienda para enagenar en subasta pública las salinas de los Alfaques y de Imon, con arreglo á lo dispuesto en la ley de desestanco de la sal.» (Es la que precede de 16 de Junio de 1869.)

LEY DE 25 DE JUNIO DE 1870.

«Art. 1.° Las minas de Riotinto, reservadas al Estado en virtud del art. 75 de la ley vigente de minería, serán vendidas en pública subasta én la forma prescrita por la presente ley.

Art. 2.° Por esta venta el Estado trasfiere el derecho de propiedad que tiene sobre el suelo y subsuelo encerrados dentro del perímetro que se demarque á las minas, y en tal concepto comprenderá:

1.° El derecho esclusivo de esplotar, beneficiar y exportar las sustancias minerales que se encuentren dentro del término que se señale á dichas minas.

2.° El aprovechamiento, así de los escoriales, terrenos y canteras contenidos dentro de dicho término, como de las aguas vitriólicas procedentes de las enunciadas minas y terrenos.

3.° Las máquinas, aparatos, caballerías, herramientas, pilones, canales y materiales de todas clases que de propiedad del Estado existan en el momento de la venta.

4.° Las fábricas, oficinas, talleres y demás edificios destinados á las diferentes faenas de la esplotacion y beneficio de minerales.

5.° Las casas, cuarteles y hospital de mineros que de propiedad del Estado existan en aquel establecimiento.

6.° La parte de los montes y terrenos pertenecientes al Estado que se conceptúe necesaria para las operaciones de esplotacion y beneficio.

Art. 3.° Los montes y terrenos que quedasen escluidos de la venta se someterán á la ley general de desamortizacion.

Art. 4.° Esta venta se entiende á perpetuidad, y sin perjuicio de someterse el comprador á las cargas y obligaciones que marquen las leyes y reglamentos vigentes de minería.

Art. 5.° Para llevar á cabo la venta se nombrará préviamente una comision compuesta de tres ingenieros del cuerpo de Minas, auxiliada de un ingeniero de Montes y un arquitecto, á fin de que en un plazo máximo de seis meses verifique la demarcacion de las minas y la tasacion de las mismas, como tambien la de los edificios, efectos y terrenos señalados en los núms. 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del art. 2.°, con arreglo á las instrucciones que se la comuniquen por el Gobierno.

Art. 6.° La tasacion de las minas y terrenos se hará tomando por base la utilidad líquida anual que podrá obtenerse de una esplotacion y beneficio acertadamente dirigidos, teniendo en cuenta las circunstancias de los criaderos, su duracion probable, los gastos de preparacion y los resultados de los sistemas mas económicos en su esplotacion, el tiempo invertido en el mejoramiento de la finca, las condiciones del mercado de cobres y todo cuanto tienda á influir favorable ó adversamente en el tipo que se deduzca.

Art. 7.° La comision nombrada á este objeto presentará al terminar su cometido una memoria científico-económica, que abrace circunstanciadamente todos los fundamentos de que se hubiese valido y las deducciones habidas en cuenta para llegar á la apreciacion definitiva, acompañándola de un inventario avalorado y del plano del término que, con arreglo al caso 6.° del art. 2.°, la misma comision conceptuare necesario para la demarcacion de dichas minas.

Art. 8.° Las dietas y gastos que se originen en el aprecio y tasacion de la mina, levantamiento y rectificacion de planos y demás trabajos que deban practicarse por la comision indicada en el art. 4.°, se satisfarán con cargo á la seccion 10, capítulo 2.°, art. 3.° del presupuesto general de gastos.

Art. 9.° La Direccion general de propiedades y derechos del Estado redactará por su parte el pliego de condiciones económicas que unido á los antecedentes que determina el art. 7.°, formarán el espediente de venta: debiendo mediar seis meses entre el primer anuncio de la convocatoria con la

(1) Véanse en la seccion 1.ª el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855; el 2.° de la de 11 de Julio de 1856, y el 2.° tambien de la instruccion de la misma fecha.

publicacion del pliego de condiciones y el acto de la subasta.

Art. 10. El pliego de condiciones de que trata el artículo anterior deberá sujetarse á las siguientes reglas generales:

1.° El precio en que se remate la finca será satisfecho en 10 plazos y nueve años.

2.° El pago de todos los plazos se verificará en metálico.

Y 3.° Se entenderá que llevan aparejada ejecucion los pagarés que entregue el comprador, reservándose al efecto la Administracion la accion ejecutiva sobre la hipoteca.»

SECCION VI.

Ley é instruccion para la venta de pequeñas terrenos ó parcelas, que por sí solos no forman solares edificables.

LEY DE 17 DE JUNIO DE 1864.

«Art. 1.° Los terrenos ó pequeñas parcelas pertenecientes á la Nacion ó á cualquier mano muerta, cuyos bienes estén declarados en estado de venta, que por sí sólos no puedan formar solares de los ordinarios, señalados en los planos de edificacion aprobados, serán adjudicados por el precio de su tasacion y á pagar al contado á los propietarios colindantes que lo pidan, siempre que sean de menores dimensiones que los que estos posean.

La tasacion de estas parcelas se efectuará en la forma establecida en las leyes de desamortizacion, teniendo muy especialmente en cuenta cual sea su valor despues de agregadas al terreno con el que hayan de formar un solar ordinario edificable.

Art. 2.° Las parcelas que sean de mayores dimensiones que los solares colindentes, aunque sin llegar á formar uno completo, podrán, á juicio del Gobierno y segun las circunstancias, ser adjudicadas en la forma establecida en el artículo anterior á los propietarios colindantes que las pidan.

En otro caso serán vendidas en pública subasta; pero dentro de nueve dias á contar desde el siguiente al en que ésta se verifique, tendrán derecho los propietarios colindantes de estos terrenos á que la adjudicacion se haga á su favor por el mismo precio y condiciones, si el que en el acto de la subasta hubiere figurado como mejor postor no fuese tambien propietario colindante ó su apoderado.

Art. 3.° Las parcelas cuya adjudicacion se solicitare por dos ó mas propietarios colindantes en cualquiera de los casos espresados en los artículos anteriores, se dividirán entre ellos ó se cederán á uno solo, segun las circunstancias de cada caso, á juicio del Gobierno y en la forma que determine el reglamento que se publique para la ejecucion de esta ley.

Art. 4.° En toda parcela, expropiada con arreglo á la ley de 17 de Julio de 1836, el propietario colindante, conforme al espíritu de la propia ley, tendrá el derecho de reversion, reintegrando el precio de expropiacion y el importe de las mejoras útiles y necesarias si las hubiere, siempre que por sí mismo ó su heredero siguiese poseyendo el terreno colindante de que aquella hubiera formado parte, y no hubiesen trascurrido quince años desde la expropiacion.

Art. 5.° Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables á los terrenos de los caminos y carreteras abandonadas, y los que no sean necesarios á las que están abiertas á la circulacion.

Art. 6.° El Gobierno dictará las reglas convenientes para la ejecucion de esta ley.»

REAL INSTRUCCION DE 20 DE MARZO DE 1865 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE PRECEDE.

«Art. 1.° Los dueños de terrenos colindantes con otros de menos dimensiones, pertenecientes al Estado y demás manos muertas, que por sí solos no puedan formar solares edificables con arreglo á los planos aprobados, manifestarán al gobernador de la provincia en que radiquen si les conviene adquirirlos, solicitando en tal caso la adjudicacion.

Art. 2.° Los dueños de terrenos colindantes con otros de mayores dimensiones pertenecientes al Estado y demás manos muertas, que por sí solos no formen solares edificables, podrán solicitar que se les adjudique en la misma forma establecida por el artículo anterior.

Art. 3.° El gobernador, en vista de las solicitudes de adjudicacion, dispondrá que se tasen los terrenos ó pequeñas parcelas por peritos nombrados con arreglo á lo prescrito en la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Art. 4.° Los peritos desempeñarán su comision con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856; harán constar en sus certificaciones haber tenido en cuenta el valor de dichas parcelas despues de agregadas al terreno con que formen solar ordinario edificable, y demostrarán si la parcela por su cabida, situacion y linderos corresponde al propietario que reclame su adjudicacion.

Art. 5.° Los derechos periciales se cobrarán con arreglo á las tarifas vigentes y en los términos que estas previenen para las demás fincas comprendidas en las leyes de desamortizacion.

Art. 6.° Presentada la certificacion pericial, el gobernador la comunicará al reclamante para que en el término de tercero dia manifieste si se conforma con la tasacion. Caso de no existir con-

formidad, el gobernador dispondrá que se venda la parcela en pública subasta; pero dejando á salvo el derecho de tanteo con arreglo al art. 2.° de la ley. Si no se presentaren licitadores, el gobernador nombrará un tercer perito que, en union de los que practicaron la tasacion primera, fijará el precio definitivo de la parcela, por el cual se adjudicará al colindante, si lo solicitare, prévia la terminacion del espediente.

En el caso de que el propietario colindante no aceptase esta nueva tasacion, la parcela se venderá con arreglo á las leyes generales de desamortizacion.

Art. 7.° Terminadas estas diligencias, pasará el espediente á informe del comisionado principal de ventas, de la administracion de propiedades y del fiscal de Hacienda, dándose cuenta de todo á la junta provincial, con cuyo dictámen se remitirá á la Direccion del ramo para la aprobacion de la Junta superior.

Art. 8.° Las resoluciones de la Junta superior de ventas no reclamadas en el término de un mes causarán estado (1).

Estas resoluciones se comunicarán al gobernador con devolucion del espediente.

Art. 9.° El gobernador dispondrá que las órdenes de adjudicacion se comuniquen á los interesados, previniéndoles que verifiquen el ingreso en tesorería dentro de un plazo de quince dias. Presentada la carta de pago, el administrador principal otorgará á nombre del Estado la correspondiente escritura de venta ante el escribano de Hacienda, arreglándose en cuanto proceda á los modelos aprobados para las ventas de fincas desamortizables. Los derechos de los escribanos se arreglarán á los aranceles vigentes para las mismas ventas.

Art. 10. Los pagos podrán hacerse en la tesorería de Madrid en concepto de movimiento de fondos de aquellas á donde radiquen las fincas. Las escrituras se otorgarán precisamente en la provincia respectiva á fin de que existan reunidos en ella todos los datos referentes á esta clase de enajenacion.

Art. 11. Pasados los 15 dias sin verificar el pago, se declarará en quiebra la venta, procediéndose á perjuicio del interesado. Se observarán en este caso las reglas establecidas por las instrucciones y órdenes vigentes para las quiebras de fincas desamortizables.

Art. 12. Los dueños de solares ó terrenos colindantes con los que posee actualmente el Estado y demás manos muertas, que se consideren con derecho á reclamar las parcelas de que tratan los artículos anteriores, deberán verificarlo dentro del término de un mes, contado desde la publicacion de esta instruccion en el *Boletin oficial* de la provincia.

Art. 13. El término de un mes, respecto de terrenos que en adelante adquiera el Estado, para la venta se contará desde el dia en que la Hacienda pública se incaute de ellos y lo anuncie en el *Boletin oficial*.

Art. 14. Pasados los plazos que respectivamente se señalan sin presentar las reclamaciones, los comisionados principales de ventas pedirán que las parcelas se enajenen en subasta pública, quedando á salvo el derecho de tanteo dentro de los nueve dias siguientes al en que se verifique dicho acto, que concede á los propietarios colindantes el art. 2.° de la ley.

Art. 15. La declaracion del derecho de tanteo se hará por medio de espediente á instancia de parte, con audiencia del rematante. Este espediente, con los informes de la administracion principal, fiscal de Hacienda y junta provincial de ventas, se remitirá á la Direccion general para la resolucion de la Junta superior.

Art. 16. Cuando dos ó mas propietarios colindantes pidan la adjudicacion de las parcelas, se instruirá el espediente como previene esta instruccion. Se pedirá informe á los peritos tasadores acerca de la conveniencia de adjudicarlas á uno ó mas interesados, debiendo espresar la porcion de terreno que individualmente les corresponda, segun el espíritu de la ley.

Art. 17. Para las reivindicaciones de terrenos á que se refiere el art. 4.° de la ley procederá tambien la instruccion del oportuno espediente, que se remitirá á la direccion del ramo á fin de que la Junta superior resuelva lo que corresponda.

Art. 18. Cuando varios colindantes reclamen la adjudicacion por trozos de una misma parcela, se les concederá en proporcion de la estension lineal y superficial de los terrenos á que haya de agregarse.

Art. 19. Las reglas antecedentes se observarán tambien en la abjudicacion de los terrenos procedentes de caminos y carreteras abandonadas y de los que no sean necesarios para las que estén abiertas á la circulacion.

Art. 20. Los espedientes relativos á la adjudicacion de esta clase de fincas se conservarán en las administraciones principales de propiedades y derechos del Estado, despues de ultimadas sus actuaciones y con las notas que espresen haberse otorgado las respectivas escrituras.

Art. 21. Los comisionados principales del ramo no devengarán derecho alguno en las adjudicaciones á que se refiere esta instruccion. Cuando por falta de aspirantes se vendan los terrenos en subasta pública, se les abonará lo que les corresponda segun la instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

(1) Véase la Real órden de 20 de Agosto de 1845, en la seccion 1.ª

SECCION VII.

Leyes y disposiciones sobre los bienes del patrimonio de la Corona.

LEY DE 12 DE MAYO DE 1865.

«Art. 22. Se declaran en estado de venta los prédios rústicos y urbanos, los censos y cualesquiera otros bienes pertenecientes al Real Patrimonio, no comprendidos en los arts. 1.° y 2.° de esta ley.

Art. 23. Los bienes que se ponen en venta continuarán hasta su enajenacion á cargo de la administracion general de la Real Casa. Las ventas se harán en pública subasta y los bienes se adjudicarán al mejor postor. Los compradores pagarán el precio en nueve años y diez plazos, segun el método prescrito para la enajenacion de los bienes del Estado en el art. 13 de la ley de 11 de Julio de 1856.

Art. 25. Para redimir los censos se señalará á los censatarios un plazo, y se establecerán las condiciones que se estimen mas equitativas, teniendo en consideracion los respectivos orígenes, naturaleza y demás circunstancias de aquellos. Trascurrido el plazo, los censos no redimidos se venderán en pública subasta al precio y bajo las condiciones con que se hubieren ofrecido á los censatarios. El importe de las redenciones y ventas se aplicará y distribuirá del modo prescrito en el artículo anterior.

Art. 29. Para la ejecucion de esta ley se formará una comision compuesta del Presidente del Consejo de Ministros, que la presidirá; del Ministro de Hacienda, que será su vice-presidente; de dos senadores y dos diputados á Córtes, elegidos respectivamente por los Cuerpos Colegisladores; del administrador general de la Real Casa; del fiscal del Supremo Tribunal de Justicia; del asesor general del Ministerio de Hacienda; del abogado consultor general de la Real Casa, y del secretario de la administracion general de la misma que será tambien secretario de la comision.

Art. 30. Esta comision formará el inventario de que trata el art. 4.°, señalará el plazo y los precios de que trata el art. 25, determinará los edificios y terrenos de que tratan los arts. 3.° y 26, y dirimirá las cuestiones pendientes ó que se susciten acerca de derechos litigiosos ó intereses controvertidos entre el Estado y el Real Patrimonio.

Art. 31. Tanto á los bienes que han de constituir el Patrimonio de la Corona, como á los que han de enajenarse en virtud de esta ley, se aplicarán las disposiciones de la de Hipotecas en la misma forma que á los del Estado.»

REGLAMENTO DE 20 DE JUNIO DE 1865, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE PRECEDE (1).

CAPÍTULO IV.—*De las condiciones generales de las ventas.*

«Art. 28. Segun dispone el art. 23 de la ley de 12 de Mayo último, y el 13 de la del 11 de Julio de 1856, el precio de los bienes vendidos ha de ser pagado por los respectivos compradores en 10 plazos iguales, de á 10 por 100 cada uno: el primero, á los 15 dias siguientes al de notificarse la adjudicacion; y los restantes, en el intervalo de un año cada uno, para que en nueve quede cubierto su valor.

Art. 29. Todas las ventas se han de hacer en pública subasta, siendo adjudicadas las fincas al mejor postor.

Art. 30. Por cada uno de los plazos en que, despues de satisfecho el primero, quedarán obligados los compradores á hacer pagos, se estenderán dos pagarés; uno por el 75 por 100 correspondiente al Estado, y el otro por el 25 que pertenece á la Real Casa.

Art. 31. Serán de cuenta de los compradores los gastos de espedientes de las ventas.

Art. 32. Se entienden por gastos de espedientes de las ventas:

1.° Los de los anuncios.
2.° Los de tasacion.
3.° Los derechos de escribano.
4.° El pago del papel sellado.
5.° Los gastos de escritura, y de inscripcion de esta en el registro de propiedad.

Art. 33. Los honorarios por las tasaciones y los derechos del escribano serán pagados con arreglo á las tarifas vigentes en el Estado para los espedientes de ventas de bienes desamortizados.

Art. 34. Cuando el valor de la finca vendida consista en su total ó mayor parte en arbolado ó montes, prestará el comprador fianza equivalente á la mitad del precio de tasacion, conforme á los arts. 94 y siguientes.

Art. 35. Segun tiene acordado la comision para la ejecucion de la ley del Real Patrimonio, en los casos en que, por razon de quiebra, haya de procederse contra los compradores, el Estado, como interesado por mayor cuantía, ejercitará en interés comun la accion competente, utilizando los recursos y medios que por las instrucciones vigentes estén establetidos, en la misma forma que

(1) Este Reglamento fué aprobado de Real órden espedida por la Administracion general de la Real Casa y Patrimonio. Con los artículos del mismo, que aquí se insertan, se formó el pliego de condiciones generales, prevenido en su art. 37, para la enajenacion de los bienes patrimoniales.

los emplea contra los deudores por compras de los bienes enajenados segun las leyes de desamortizacion.

A este efecto, la administracion general del Real Patrimonio pondrá, llegado el caso, los pagarés que le pertenecen en poder de las oficinas del Estado.

Lo espresado en los dos párrafos anteriores se aplicará del mismo modo á los casos en que el comprador deje de satisfacer á su vencimiento los pagarés correspondientes al Estado y los que pertenezcan á la Casa Real, como á aquellos en que satisfaga los unos y los otros no.

Art. 36. En los juicios de reivindicacion, eviccion y saneamiento, está sujeta la Real Casa á las reglas comunes del derecho, así como á la indemnizacion de las cargas de las fincas que al tiempo de venderse no estuvieren tomadas en cuenta.

Art. 37. Se formará un pliego de condiciones generales para las ventas.

Mandado imprimir, y circulado por la administracion general á las administraciones y bailías, estarán constantemente ejemplares de él espuestos en las porterías de la secretaría de la administracion general, y de todas las oficinas del Real Patrimonio en que se cuide de bienes declarados en estado de venta.

CAPÍTULO V.—*De las condiciones generales para la redencion y venta de censos.*

Art. 38. En cumplimiento de lo dispuesto por la comision para la ejecucion de la ley del Real Patrimonio, se observarán las reglas contenidas en los siguientes artículos, en lo relativo á los censos que al mismo pertenecen.

Art. 39. Se procederá á la redencion, y en su caso á la venta de los censos reservativos situados en las casas de la plaza de Oriente y sus inmediaciones, con las condiciones que siguen:

1.ª Se condona á los censatarios la mitad del capital de sus censos.

2.ª La otra mitad la podrán pagar en cuatro plazos iguales, el primero al contado, y los demás de año en año.

Al que prefiera pagarla toda al contado, se le rebajará el importe de lo que debiese satisfacer en los plazos 2.º, 3.º y 4.º á razon de 6 por 100 anual, ó sea un 6 por 100 por el 2.º, un 12 por el 3.º, y un 18 por el 4.º

3.ª Los censatarios que quieran la redencion, la deberán pedir en término de noventa dias.

4.ª Pasado este término, se procederá á la venta en pública subasta con las mismas condiciones propuestas á los censatarios.

Art. 40. A fin de reunir las noticias necesarias para fijar las condiciones de redencion y de venta de los censos del Real Patrimonio en las provincias del antiguo reino de Aragon, se formará un espediente en que se reunan los datos que mas convengan al efecto, y los dictámenes de las bailías generales y de los abogados consultores de las mismas sobre la mejor manera de proceder y de resolver en este asunto.

Art. 41. Se procederá á la redencion y á la venta de los censos enfitéuticos del barrio de Argüelles, bajo las condiciones siguientes:

1.ª Se condona á los enfiteutas la mitad del capital de sus censos, que á razon de uno y medio tienen estipulado.

2.ª Podrán pagar la otra mitad en cuatro plazos iguales, el primero al contado y los demás de año en año.

Al que prefiera pagarla toda de una vez, se le rebajará el importe de los plazos 2.º, 3.º y 4.º, á razon de 6 por 100 anual.

3.ª Los censatarios que quieran la redencion, la pedirán en término de noventa dias.

4.ª Pasado ese término sin que se pida, se procederá á la venta en pública subasta con las mismas condiciones propuestas á los enfiteutas.

5.ª Con el pago de la mitad del capital se entenderá estinguido lo relativo al derecho de laudemio y demás que corresponden al dominio directo.

6.ª Celebrada la venta en pública subasta, se reservará á los enfiteutas el derecho, que disfrutan, de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los veinte dias siguientes á la adjudicacion del remate.

Art. 42. Los censos enfitéuticos no comprendidos en el territorio de las bailías ni en el barrio de Argüelles, podrán ser redimidos y vendidos con arreglo á las disposiciones del derecho comun vigentes en materia de redencion de censos entre particulares.

La citada comision se ha reservado, en uso de las facultades que por la ley le competen, dictar reglas especiales, si de la formacion del inventario de los bienes puestos en venta resultasen mas casos dignos de ser estudiados y resueltos separadamente.

Art. 43. Todas las disposiciones contenidas en este reglamento relativas á ventas de fincas, se entenderán igualmente respecto de las redenciones y ventas de censos en cuanto les sean aplicables, y no se opongan á lo que para los censos especialmente se prescribe.

CAPÍTULO VII.—*De las subastas.*

Art. 51. Cuando el precio de tasacion de la finca no esceda de 10,000 rs., la licitacion tendrá lugar en la bailía ó administracion patrimonial á que la finca corresponda, si no estuviere situada en Madrid, en cuyo caso se celebrará siempre la subasta en la secretaría de la administracion general.

Cuando la finca estuviere á cargo de una bailía local, se celebrará doble remate simultáneo en la bailía general y en la local.

Art. 52. Cuando la tasacion de la finca le señale un precio superior á 10,000 rs., además del remate ó remates que deban celebrarse con arreglo al artículo anterior, se celebrará simultáneamente otro en la secretaría de la administracion general.

Si la finca estuviera situada en Madrid, solo habrá el remate celebrado en dicha secretaría.

Art. 53. No pueden tomar parte en los remates:

1.° Los que de cualquier modo intervengan en la venta.

2.° Los que sean deudores al Real Patrimonio.

Art. 54. El que quiera tomar parte en un remate, tendrá que entregar préviamente como fianza una cantidad que cubra la centésima parte del precio de la tasacion.

Art. 55. En Madrid se hará la entrega de esa cantidad en la tesorería general, y se acreditará en el acto del remate con el recibo que la misma espida.

Art. 56. En las administraciones y bailías se entregará la cantidad en el acto del remate, á no ser en los casos en que, por la considerable cuantía de la misma, disponga otra cosa la administracion general.

Art. 57. Abierto por el presidente el acto del remate, lo que de ningun modo podrá hacerse antes de la hora señalada en los anuncios, se admitirán las proposiciones que se hagan para la compra del edificio, terreno ó censo que se subaste.

Art. 58. No se admitirá proposicion que no cubra el precio de tasacion fijado en los anuncios, ni la que introduzca cualquiera alteracion en las condiciones señaladas, ó se refiera á otra que no sea precisamente el precio.

Art. 59. Tampoco será admitida la que no esceda de la mayor proposicion ya presentada, en la cantidad que corresponda segun la cuantía de la cosa vendida, y la tarifa siguiente:

Cuando la tasacion no pase de cinco mil reales, las pujas serán de veinte por lo menos.

Cuando sea de mayor importancia, pero no esceda de 20,000 rs., las pujas no serán de menos de 50.

Cuando pase de 20,000 y no de 100,000, no podrán bajar de 100.

Cuando pase de 100,000 y no de 1.000,000, no se admitirán pujas menores de 500.

Y cuando la tasacion pase de 1.000,000, las pujas serán por lo menos de 1,000 rs.

Art. 60. Hecha una proposicion, será escrita y proclamada por el escribano ó su dependiente.

Si no se hiciese puja, se proclamará la escrita por segunda vez; y si tampoco se hiciera, se proclamará por tercera vez, y el presidente adjudicará el remate.

Pero si se hiciese despues de la primera proclamacion y antes de estar concluida la tercera, se empezará de nuevo á escribir y á proclamar la nuevamente hecha, prescindiendo ya de las anteriores.

Art. 61. La adjudicacion se hará á nombre del que haya hecho la postura mas ventajosa, ó al de la persona que él designe.

Art. 62. Hecha la adjudicacion, se devolverán en el acto del remate todas las fianzas, escepto la del adjudicatario.

Art. 63. En Madrid se hará la devolucion entregando á sus dueños los respectivos recibos de la tesorería general, cuyo importe ésta reintegrará en el momento de serle presentados.

Art. 64. Si en los casos de celebrarse simultáneamente un remate en dos ó en tres puntos distintos, resultase adjudicado á dos ó tres proposiciones iguales, decidirá entre ellas la suerte.

Art. 65. Firmarán el acta del remate celebrado en Madrid:

El presidente, que será el secretario de la administracion general, ó si él no pudiere asistir, el jefe de la seccion de patrimonio.

El empleado que asistiere como auxiliar del presidente, que será dicho jefe de seccion, y cuando éste presida, el oficial del negociado.

El adjudicatario.

Y el escribano, que estenderá dicha acta.

Art. 66. Fuera de Madrid, asistirán á los remates, y firmarán las actas, además del adjudicatario:

El administrador ó baile.

El interventor.

El escribano.

Art. 67. Cuando hubiere de verificarse el sorteo de que trata el art. 64, se hará en la secretaría de la administracion general, asistiendo al acto el secretario, el jefe de seccion, el oficial del negociado y el escribano.

Art. 68. En el caso de no haber remate por falta de postores, si la subasta es de las que se verifican en Madrid, la administracion general dispondrá si ha de anunciarse otra por el mismo precio con un plazo de diez ó mas dias, si se ha de hacer una rebaja en dicho precio, si se ha de retasar la finca ó cualquiera otra cosa que tenga por conveniente.

Si la subasta fuese de las que por su menor cuantía solo deben verificarse fuera de Madrid, el administrador patrimonial ó baile respectivo anunciará desde luego otra por un plazo de diez ó mas dias con las mismas condiciones; y si tampoco la segunda tuviere resultado, propondrá á la administracion general las reformas que conceptúe prudente hacer, manifestando las causas que en su dictámen hayan alejado á los postores.

Art. 69. El administrador patrimonial ó baile general remitirá siempre á la administracion general, por el primer correo, el acta de todo remate que presida, á no ser que simultáneamente se haya celebrado tambien en una bailía subalterna, en cuyo caso las enviará, sin pérdida de correo, en cuanto reciba la del baile local, que á su vez deberá dirijírsela con igual prontitud.

CAPITULO VIII.—*De los primeros pagos.*

Art. 70. Aprobado definitivamente un remate, si el adjudicatario hubiese hecho su proposicion en Madrid, se le notificará la aprobacion por el escribano, á quien la administracion general pasará al efecto directamente la Real órden oportuna.

Si el adjudicatario se hubiese presentado en otro punto, la Real órden de aprobacion del remate será remitida al baile general ó administrador respectivo, y por este conducto deberá llegar cuanto antes al escribano que corresponda para la debida notificacion.

Si el adjudicatario lo pide, el escribano le dejará testimonio del remate.

Art. 71. En la Real órden de aprobacion, se deducirá del importe del remate el de los censos que tuviere contra sí la finca vendida.

Art. 72. Para hacer la deduccion, se liquidarán los censos á razon de 3 por 100 los reservativos y consignativos, y de 1 ½ por 100 los enfitéuticos.

Art. 73. El pago del primer plazo se verificará en metálico, en uno de los 15 dias siguientes al de la notificacion.

Art. 74. El adjudicatario de un remate puede ceder este á tercera persona, manifestándolo así por escrito antes de presentarse á hacer los primeros pagos.

Art. 75. No se admitirá ese pago sin que los compradores entreguen al mismo tiempo los gastos de espediente que son de su cargo, y firmen debidamente los pagarés para los plazos sucesivos; y cuando la finca sea de arbolado, sin que otorguen la correspondiente fianza.

Art. 76. Al efecto se estenderán tres cargarémes, uno por la cantidad que ha de pagarse en metálico, otro por los pagarés correspondientes á los plazos sucesivos, y otro por los gastos de espediente que correspondan al comprador.

Art. 77. El cargaréme relativo á la entrega en metálico, espresará la cantidad, esplicando que corresponde al primer plazo del precio del remate de una finca, y manifestando cuál es esta finca, pero sin hacer distincion entre lo que respectivamente pertenece de dicha cantidad al Estado y á la Casa Real.

Art. 78. Los pagarés serán diez y ocho; uno por el 75 por 100 del importe de cada uno de los nueve plazos que se han de suceder de año en año, en iguales fechas de dia y mes que la del primer pago en metálico; y otro por el 25 por 100 del mismo importe de cada uno de dichos nueve plazos.

Art. 79. El cargaréme por los pagarés hará la debida espresion de los diez y ocho, y de sus respectivos importe y fecha.

Art. 80. Cuando se rediman ó vendan censos, el número de los pagarés será el que corresponda segun el de los plazos señalados para cada caso por la comision creada por la ley, pero haciéndose siempre dos para cada plazo, uno por el 75 por 100, y el otro por el 25.

Art. 81. Los pagarés serán siempre estendidos por la secretaría de la administracion general, que, cuando deban ser firmados fuera de Madrid, los remitirá, con las fechas en blanco, á la administracion ó bailía respectiva, al mismo tiempo que la Real órden de aprobacion del remate.

Art. 82. El cargaréme por los gastos de espediente, comprenderá los de los anuncios, de los honorarios de los tasadores, y del escribano y del papel sellado, computados con arreglo á los artículos siguientes.

Art. 83. Cuando los gastos de anuncios sean comunes á varias fincas, se prorratearán entre ellas á proporcion del importe de las tasaciones.

Art. 84. Los honorarios de los tasadores de fincas urbanas se regularán con arreglo al artículo 186 de la instruccion espedida por el Ministerio de Hacienda en 31 de Mayo de 1855, ajustándose en consecuencia á la siguiente tarifa segun el importe de las tasaciones:

			Madrid.	Provincias.
De	1,000 á	50,000. . .	90	60
De	50,000 á	100,000. . .	125	80
De	100,000 á	150,000. . .	234	150
De	150,000 á	200,000. . .	308	220
De	200,000 á	300,000. . .	406	270
De	300,000 á	600,000. . .	560	300
De	600,000 á	1.000,000. . .	1,030	680
De	1.000,000 á	1.500,000. . .	1,560	1,040
De	1.500,000 á	3.000,000. . .	2,100	1,400
De	3.000,000 á	6.000,000. . .	3,200	2,120
De	6.000,000 á	9.000,000. . .	4,800	3,200
De	9.000,000 en adelante. . .		7,200	4,800

Art. 85. Los derechos de tasacion de fincas rústicas, con arreglo á la Real órden espedida por el Ministerio de Hacienda en 21 de Setiembre de 1859, serán:

Fanegas.			Reales cénts. por fanega.
De	1 á	5.	12,00
De	5 á	10.	10,00
De	10 á	20.	9,00
De	20 á	50.	6,75
De	50 á	100.	3,50
De	100 á	200.	2,90
De	200 á	500.	2,33
De	500 á	1,000.	1,00

No se exigirá mas que el máximum de 1,000 rs., aun cuando la finca tuviera mas de las 1,000 fanegas de cabida.

Si una finca fuera dividida en suertes para su venta, los derechos de tasacion no se regularán aplicando la tarifa segun el número de fanegas que contenga cada porcion ó suerte, sino por el que mida la finca sin dividir prorateándose la totalidad de los derechos.

Art. 86. En los casos de tasacion de fincas con arbolado, en que hayan concurrido el arquitecto mayor y sus subalternos con los funcionarios del ramo de Reales bosques, se repartirán los derechos en la proporcion que, segun los casos, acuerde la administracion general.

Art. 87. Si las fincas fueren retasadas, los dechos que se marcan en los artículos anteriores serán divididos por mitad entre los primeros y segundos tasadores.

Art. 88. Los derechos del escribano por su intervencion en los espedientes de subasta y espedicion del testimonio para verificar el primer pago, se ajustarán á lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes de la citada instruccion de 31 de Mayo de 1855, y Real órden de 13 de Julio del mismo año.

Art. 89. En virtud de lo prescrito en el artículo anterior, los derechos del escribano se fijarán con arreglo á la siguiente tarifa, segun la cuantía de las tasaciones:

Desde	2,001	á 5,000 rs. . .	12
Desde	5,001	á 10,000. . . .	18
Desde	10,001	á 20,000. . . .	27
Desde	20,001	á 35,000. . . .	36
Desde	35,001	á 60,000. . . .	45
Desde	60,001	á 100,000. . . .	54
Desde	100,001	á 150,000. . . .	66
Desde	150,001	á 200,000. . . .	78
Desde	200,001	á 500,000. . . .	102
Desde	500,001	á 1.000,000. . . .	130
Desde	1.000,000	en adelante. . . .	200

En la provincia de Madrid, por la formacion de los espedientes de fincas que radiquen en su término, satisfarán los compradores una cuarta parte más de las cantidades señaladas en la tarifa anterior.

Art. 90. Aunque la subasta de una finca haya de ser doble ó triple, no pagará el comprador sino los derechos fijados en la anterior tarifa, que serán distribuidos entre los escribanos respectivos.

Art. 91. Cuando la tasacion de la finca, censo, ó cualquiera otra clase de bienes que se saque á subasta, no pase de 2,000 rs., no devengará derechos el escribano.

Art. 92. Si el Estado modificase las reglas y tarifas que anteceden para los derechos de tasacion y los del escribano en las subastas de los bienes cuya venta está á su cargo, así como los relativos al otorgamiento de escrituras, de que tratan el artículo 109 y siguientes de este reglamento, se entenderán hechas tambien las mismas modificaciones para las de los bienes del Real Patrimonio.

Art. 93. El papel que deben reintegrar los compradores al hacer el primer pago, es solo el necesario hasta esta situacion del espediente, pero no el correspondiente á la escritura y demás hechos posteriores.

Art. 94. La fianza que debe prestar el comprador si el valor de la finca ó fincas adjudicadas consistiere en su total ó en su mayor parte en arbolados ó montes, además de quedar responsable al completo pago en que hayan sido rematadas, deberá equivaler á la mitad de la suma en que hubiesen sido tasadas, si se hiciere en otras fincas; y á las dos terceras partes si en títulos de la deuda diferida, de la consolidada del 3 por 100, ó en acciones de carreteras, considerados sus valores segun la última cotizacion oficial.

Art. 95. Si la fianza se prestase en otras fincas, el comprador otorgará la correspondiente escritura, de que sacará copia y la presentará á la respectiva administracion patrimonial cuando se haya de hacer el pago fuera de Madrid, y en otro caso á la administracion general.

Art. 96. La copia de la escritura de fianza ó los títulos de la deuda deben ser presentados dentro de los quince dias siguientes al de la notificacion del remate, en los cuales debe hacerse el primer pago.

Art. 97. La administracion general ó la patrimonial respectiva cuidarán de promover, inmediatamente que se les presente la copia de la escritura de fianza, la debida inscripcion en el registro de la propiedad.

Art. 98. No se alzará la fianza hasta que estén satisfechos por el comprador todos sus pagarés.

Art. 99. Estendidos los tres cargarémes, con ellos y con los pagarés se presentará el comprador en la tesorería general de la Real Casa en Madrid, ó en la caja de las administraciones patrimoniales ó bailías, y le serán canjeados, mediante además la entrega del primer plazo de 10 por 100 que ha de satisfacer al contado, por las tres correspondientes cartas de pago.

Art. 100. El recibo del depósito hecho para tomar parte en la subasta, le será admitido al comprador á cuenta de lo que debe pagar en metálico.

Art. 101. Las cartas de pago, cuando éste deba hacerse en una bailía local, serán estendidas por la general, que las remitirá sin fecha y sin firma á la subalterna, al mismo tiempo que la aprobacion definitiva de la subasta y que los pagarés, á fin de evitar todo error y toda demora cuando se presenten los compradores á realizar los primeros pagos.

Llegado este caso, la bailía se hará cargo de las

cantidades que deban ser satisfechas por los compradores, recojerá las firmas de éstos en los pagarés y firmará y entregará las cartas de pago, poniendo las fechas en unos y otros documentos.

Art. 102. Si el comprador no se presentase á pagar dentro del término de los quince dias siguientes al de la notificacion, perderá todo derecho á la finca rematada, y á la devolucion del depósito hecho para poder tomar parte en la licitacion, el cual será proporcionalmente distribuido entre el Estado y la Casa Real, como cualquiera otro ingreso realizado por razon de las ventas; siendo la finca sacada nuevamente á subasta.

Art. 103. Podrán hacerse en Madrid los pagos, aunque la proposicion se haya presentado en otro punto, pero solicitándolo con la antelacion necesaria para que puedan realizarse dichos pagos antes de cumplirse los quince dias que sigan al de la notificacion.

CAPÍTULO IX.—*De la toma de posesion, y de la escritura.*

Art. 104. A la presentacion de la carta de pago del primer plazo de 10 por 100, será puesto el comprador en posesion de su finca por el empleado del Real Patrimonio que hasta entonces la tuviere á su cargo.

Art. 105. Las escrituras serán otorgadas ante el escribano que el Real Patrimonio haya hecho asistir al remate.

Art. 106. Si el remate hubiere sido doble ó triple, el comprador podrá elegir, entre los dos ó tres escribanos que hayan asistido á los mismos, el que haya de intervenir en el otorgamiento de la escritura.

Art. 107. Las escrituras de venta que hayan de hacerse en Madrid serán otorgadas por el administrador general de la Real Casa; las que deban ser hechas en las administraciones ó bailías, por los respectivos administradores ó bailes, para lo que se adoptarán por la administracion general las medidas oportunas.

Art. 108. Si en favor de una sola persona se hubieren rematado varias fincas de igual procedencia, podrán comprenderse en una misma escritura cuando el rematante lo exija.

Art. 109. Los compradores de fincas ó censos, y los redimientes de estos últimos, satisfarán al escribano por el otorgamiento de cada escritura los derechos que á continuacion se espresan, en proporcion del capital que la escritura represente.

Hasta 100 reales.	»
De 101 á 500.	8
De 501 á 3,000.	10
De 3,001 á 10,000.	12
De 10,001 á 15,000.	16
De 15,000 en adelante.	20

Estos derechos se aplicarán segun el capital total á que asciendan las diferentes fincas ó censos que respectivamente se comprendan en la escritura; exigiéndose además dos reales para el mismo escribano por cada diez fincas ó censos que se comprendan en una misma escritura, y resulten de esceso sobre los primeros.

Art. 110. Los derechos espresados en el artículo anterior lo serán por toda la actuacion, incluso el original de la escritura que debe quedar protocolizado.

Art. 111. Las escrituras se estenderán en los ejemplares mandados imprimir, y distribuidos al efecto por la administracion general.

Art. 112. El reintegro del papel sellado necesario para el otorgamiento de la escritura, será hecho por los compradores al pagar los derechos del escribano.

Art. 113. Al otorgarse la escritura de venta ó de redencion, se entregarán al comprador ó redimente los títulos escritos de propiedad si los hubiere, ó en otro caso el duplicado de la certificacion de posesion que deberá haber devuelto el registrador.

CAPÍTULO X.—*De las quiebras.*

Art. 114. Cuando un comprador deje de satisfacer el dia de su vencimiento cualquiera de los pagarés firmados por él, la administracion patrimonial en cuya caja debiera ser hecho el pago, le pasará dos cédulas de invitacion, la primera dándole el término de quince dias, y trascurridos estos, otra con el de diez; y si á pesar de todo esto no hubiere verificado el pago, se procederá á conocer si el deudor tiene otros bienes de mas fácil salida que la finca ó fincas de que proceda el débito, para satisfacerle con el valor de ellas.

Art. 115. En el caso de no tenerlos, se declarará la finca ó fincas en quiebra, y se anunciará la subasta, con cargo al quebrado de la diferencia que resulte en el precio de ambos remates, y de los gastos que se hicieren en el segundo.

Art. 116. En las nuevas subastas de las fincas declaradas en quiebra, se espresará esta circunstancia en los anuncios, así como el número é importe de los plazos que de la primera venta ya estuvieren vencidos; se exigirá al nuevo comprador el pago al contado de dicho importe; y al rematante declarado en quiebra, de una vez y tambien al contado, la diferencia entre ambos remates y los gastos del segundo, deduciendo los pagos que hubiere hecho, y el producto de las rentas de las fincas que deben abonársele en su cuenta.

Art. 117. El Estado procederá contra los declarados en quiebra en los términos marcados en el art. 35.»

LEY DE 18 DE DICIEMBRE DE 1869.

Art. 1.° Se declara estinguido el Patrimonio de la Corona fundado por la ley de 12 de Mayo de 1865.

Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominacion y la de Real Casa revierten en pleno dominio al Estado.

Art. 2.° Todos los bienes que bajo el espresado concepto se incorporan al Estado, así como los detentados que este reivindique en adelante, serán enajenados, á escepcion de los siguientes:

1.° Los que se destinan al uso y servicio del Rey.

2.° Los que por su carácter histórico ó artístico deban conservarse.

3.° Los que convenga destinar para servicio del Estado.

4.° Aquellos que con arreglo á la ley de 9 de Junio del presente año se cedan para las servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos enclavados en los territorios que fueron de la Corona.

Art. 3.° Los bienes raíces no esceptuados se enajenarán por el Ministerio de Hacienda segun lo dispuesto en la legislacion vigente sobre propiedades y derechos del Estado.

Los bienes muebles y semovientes se enajenarán en pública subasta, y su importe se satisfará en metálico y al contado.

Art. 4.° Los compradores de inmuebles y censos y los que redimieren estos, pagarán el precio en el número de años y plazos establecidos y segun el método prescrito para la enajenacion de los bienes de corporaciones civiles.

Art. 5.° Lo determinado en el artículo anterior es igualmente aplicable á los bienes segregados del Patrimonio en virtud de la ley de 12 de Mayo de 1865, y que todavía no hayan sido enajenados. Respecto de estos bienes, se declara subsistente y en todo su vigor lo dispuesto en el art. 24 de la ley citada; y en su virtud el 25 por 100 del precio de las rentas de los no enajenados y de la redencion de los censos, se aplicará al pago de los débitos de la Real Casa al Tesoro y á los particulares, guardando el órden de prelacion establecido por las leyes. ...

Art. 7.° Se procederá á la redencion, y en su caso á la venta de los censos enfitéuticos, consignativos, reservativos y de cualquier clase que sean, como asimismo de todo capital, cánon ó renta de naturaleza análoga pertenecientes al Patrimonio de la Corona.

Art. 8.° Se consideran como censos para los efectos de esta ley los arrendamientos comprendidos en el art. 2.° de la ley de 27 de Febrero de 1856, aclaratoria de la de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855.

Art. 9.° La redencion, capitalizacion y venta se llevarán á cabo con arreglo á la legislacion general vigente.

Art. 10. Los bienes de los patronatos de la Corona se enajenarán con arreglo á las leyes de desamortizacion.

Las cargas de hospitalidad, de beneficencia, las espirituales y otras que pesan sobre los patronatos, se capitalizarán debidamente; y para su continuacion y cumplimiento, sin perjuicio de ser revisadas, se espedirán inscripciones nominativas intransferibles del 3 por 100 interior, cuyos intereses formarán la renta que ha de cubrir aquellas obligaciones.

Art. 11. Los bienes raíces que se ponen en venta seguirán hasta su enajenacion á cargo del Ministerio de Hacienda, el cual continuará entendiendo en todos los asuntos referentes al Patrimonio de la Corona por ventas hechas antes de la presente ley, y en la enajenacion y aplicacion de los muebles y semovientes contenidos en los palacios, edificios y prédios.

Los bienes muebles é inmuebles que se esceptúen de la venta, con arreglo á lo prescrito en los párrafos 2.° y 3.° del art. 2.° de esta ley, se entregarán, mediante inventario, á los Ministerios á que por su clase correspondan.

Art. 12. Los incidentes y reclamaciones que produzcan las ventas y los censos redimidos en virtud de lo dispuesto en la citada ley de 12 de Mayo de 1865 y reglamento dictado para su ejecucion, se tramitarán y resolverán con arreglo á la misma ley y reglamento.....»

SECCION VIII.

Legislacion de Indias: disposiciones sobre la venta de bienes de las órdenes religiosas suprimidas en la isla de Cuba.

REAL DECRETO DE 18 DE JULIO DE 1862.

«A propuesta del Ministro de la Guerra y de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Estado y el de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se declaran en estado de venta con arreglo á las prescripciones del presente Real decreto, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos, todos los prédios rústicos y urbanos, solares y censos que pertenecieron á las suprimidas órdenes religiosas de la isla de Cuba.

Art. 2.° Esceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

1.° Los templos destinados al culto.

2.° Los edificios destinados ó que el Gobierno destinare al servicio público.

3.° Cualquier otro edificio ó finca cuya venta no crea el Gobierno oportuna por razones graves.

Art. 3.° Se procederá á la enejenacion de todos y cada uno de aquellos bienes, sacando á pública licitacion las fincas ó sus suertes á medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamacion, segun lo disponga la Superintendencia general delegada de Hacienda de la isla, verificándose las ventas con la mayor division posible de las fincas, siempre que no perjudique á su valor.

Art. 4.° Presentada que sea alguna solicitud de compra, se procederá á la tasacion de la finca por los medios que determina el reglamento especial que se formará al efecto. Para esta tasacion se tendrán en cuenta todas las circunstancias de la finca ó terreno enajenable, como son los centros de poblacion ó fincas que haya á sus inmediaciones, costas, puertos y vías de comunicacion vecinas, y en general cuanto puede aumentar la estimacion de los terrenos, la de los materiales de construccion existentes, y la de las construcciones futuras.

Art. 5.° En las tasaciones de fincas rústicas se apreciarán con separacion las tierras, los edificios, los ganados y los bosques. Cuando la finca, por su proximidad á algun centro de poblacion, pueda con ventaja convertirse en solares urbanos, se formará espediente al efecto y prévia la aprobacion de la Superintendencia, se sacará á licitacion en esta forma.

Art. 6.° La enajenacion de todos los bienes comprendidos en este Real decreto tendrá lugar en doble subasta simultánea, celebrada la una de ellas en la capital y la otra en la cabeza del distrito judicial en que radique la finca vendible. Si esta se halla situada en el casco de la capital, se celebrará una sola subasta.

Art. 7.° Cualquiera persona tendrá facultad para pedir por escrito al Intendente general que disponga la tasacion de la finca ó fincas que designare entre las que todavía no hubieren sido tasadas ni comprendidas por lo tanto en las listas publicadas para proceder á las subastas.

Art. 8.° El Intendente comunicará inmediatamente las órdenes necesarias para que tenga lugar la tasacion, y hará insertar en la *Gaceta de la Habana* y en cualesquiera otros periódicos que se publiquen un aviso que esprese la finca ó fincas cuya tasacion se hubiere reclamado.

Art. 9.° Verificada la tasacion, se anunciará al público por el medio indicado, y este anuncio tendrá la fuerza de una notificacion en forma á la persona que reclamó la operacion.

Art. 10. Quince dias despues de publicado el precio de la tasacion, á mas tardar, se anunciará la venta de la finca ó predios designados, observándose en la subasta las mismas reglas dictadas para la enajenacion en general de los bienes á que este mi Real decreto se contrae.

Art. 11. Las tasaciones serán aprobadas por el Intendente general.

Art. 12. Corresponde presidir las subastas al juez de Hacienda con asistencia del promotor fiscal del ramo, en la Habana, y á los alcaldes mayores con la de los promotores fiscales respectivos fuera de la capital.

Art. 13. El acta de la subasta se remitirá á la Intendencia general, la cual con su informe la pasará á la Superintendencia para su aprobacion definitiva.

Art. 14. Para asesorar á la Intendencia general en la formacion de registros de fincas vendibles y censos enajenables, en los espedientes que se promuevan sobre division de fincas, conveniencia ó inconveniencia de la enajenacion de cualquiera de ellas, aprobacion de tasaciones, espedientes de subastas, de redenciones de censos y en general en todos los incidentes á que diere lugar lo dispuesto en este mi Real decreto, se crea una Junta, denominada de *Ventas de bienes procedentes de regulares*, que presidirá el mismo Intendente, compuesta de dos consejeros de administracion de la seccion de Hacienda, de dos personas notables por su ciencia, arraigo y probidad, designadas estas cuatro por la Superintendencia, del juez y del fiscal de Hacienda y de un secretario, que lo será el de la Intendencia general.

Art. 15. Los compradores de las fincas quedan obligados al pago en metálico de las sumas en que les sean adjudicadas y en la forma siguiente: en diez plazos iguales de á 10 por 100 cada uno del valor total, á saber: el primer plazo dentro de los tres dias siguientes al de notificarse la adjudicacion, y los restantes, con el intervalo de un año cada uno, de modo que en el período de nueve años quede satisfecho todo el precio. Los compradores podrán anticipar uno ó mas plazos, en cuyo caso se les abonará el interés de 8 por 100.

Art. 16. Los solares arrendados y en que los arrendatarios hayan edificado podrán ser adquiridos por estos por el precio de la tasacion, que sirvió de base á los arrendamientos, para lo cual se señalará plazo oportuno en las instrucciones ó reglamentos.

Art. 17. Los solares no arrendados, pero si ocupados por edificios con título legítimo, podrán enajenarse en la misma forma que los anteriores.

Art. 18. Los solares arrendados en que no se hubiese edificado se sujetarán á público remate como todos los no comprendidos en los dos precedentes artículos.

Art. 19. Se declaran como censos los arrendamientos anteriores al año de 1800 que, no escediendo de 1,100 rs. de plata fuerte en su orígen ó en el último año, hayan subsistido desde aquella fecha en una misma familia. Lo mismo se entenderá, aunque el arrendamiento total esceda de 1,100 rs. de plata fuerte, si estando la finca dividida entre varios particulares no paga cada uno de ellos suma mayor que la espresada.

Art. 20. Las ventas verificadas en subasta pública estarán exentas del derecho de alcabala y de hipoteca, así como de cualquier otro impuesto análogo.

Art. 21. Un año despues de publicado en la isla de Cuba este Real decreto, caducarán los arrendamientos pendientes, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Art. 22. Los herederos de los compradores de fincas se subrogan á las personas heredadas para el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes por pago de plazos, hasta consumar el del importe total del precio en que fueron rematadas las fincas.

Art. 23. Las fincas quedarán hipotecadas al pago de las obligaciones que debe otorgar el comprador. Esta circunstancia se hará constar en la escritura de venta que trasmita la propiedad.

Art. 24. Cuando al vencimiento de una obligacion no fuese puntualmente satisfecha, se darán al deudor los avisos que prevenga el reglamento; y cuando hubiere pasado su término, y el mismo deudor no tenga otros bienes de mas pronta y espedita realizacion, se procederá á nueva subasta de la finca ó fincas á que pertenezca el débito, sufriéndose todos los gastos por el que fué su adjudicatario, á fin de reintregar á la Hacienda pública y asegurarla el cobro por entero de lo que reste al completo del importe del primer remate.

Art. 25. La Superintendencia procederá á formular, oyendo á la Intendencia y al Consejo de Administracion, y someterá á la aprobacion de mi Gobierno, el reglamento especial que, á tenor de estas bases, ha de observarse para la tasacion y capitalizacion de los bienes por la renta, para la enajenacion de los censos, para asegurar la realidad de la concurrencia en las subastas, y la responsabilidad de los compradores, teniendo presentes para este fin, y en la parte que le es aplicable la ley de 16 de Enero de 1836, el Real decreto de 19 de Febrero siguiente, la ley de 1.° de Mayo de 1855 y los reglamentos para la ejecucion de ambas disposiciones legislativas.

Art. 26. Las atenciones de instruccion pública y de beneficencia que actualmente se satisfacen en la isla de Cuba del producto de los bienes del Estado, procedentes de las estinguidas órdenes religiosas, se incluirán para lo sucesivo en el presupuesto general de gastos de la isla, y se pagarán por su tesorería general de Ejército y Hacienda como las demás obligaciones de aquellas cajas.»

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. DE LOS BIENES DECLARADOS EN ESTADO DE VENTA, EN CONCEPTO DE NACIONALES: ESCEPCIONES: DIVISION Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS.

§. 1.° *Bienes del Estado.*

§. 2.° *Bienes del clero; de las órdenes militares; de cofradías, obras pías y santuarios, y demás manos muertas eclesiásticas.*

§. 3.° *Bienes de propios y comunes de los pueblos.*

§. 4.° *Bienes de beneficencia y de instruccion pública.*

§. 5.° *Bienes del patrimonio de la Corona.*

§. 6.° *Division y clasificacion de estos bienes para los efectos de las ventas.*

SEC. II. DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN ESTAS VENTAS Á NOMBRE DEL ESTADO: ATRIBUCIONES RESPECTIVAS DE LOS MISMOS, Y RECURSOS CONTRA SUS PROVIDENCIAS.

SEC. III. DE LOS REQUISITOS Y SOLEMNIDADES PARA LA VENTA DE BIENES NACIONALES.

§. 1.° *Clasificacion, medida y tasacion de las fincas.*

§. 2.° *Division de las fincas rústicas que lo permitan.*

§. 3.° *Capitalizacion.*

§. 4.° *Anuncios y término para las subastas: lugar donde han de celebrarse.*

§. 5.° *Condiciones de las subastas.*

§. 6.° *Celebracion de la subasta y remate: personas que pueden hacer postura.*

§. 7.° *Segunda y ulteriores subastas por falta de postor en las anteriores.*

§. 8.° *Aprobacion del remate y adjudicacion de las fincas: sorteo en los casos de empate.*

§. 9.° *Liquidacion de cargas.*

§. 10. *Notificacion al rematante de la adjudicacion de la finca: pago del primer plazo.*

§. 11. *Cesion del remate.*

§. 12. *Posesion al comprador, y sus efectos.*
§. 13. *Escritura de venta y su registro.*
§ 14. *Derechos de los espedientes de subasta.*
SEC. IV. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS COMPRADORES DE BIENES NACIONALES.
§. 1.° *Obligaciones del comprador.*
§. 2.° *Derechos del comprador.*
SEC. V. DEL PRECIO: PLAZOS Y FORMA EN QUE HA DE PAGARSE.
SEC. VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRA LOS COMPRADORES POR FALTA DE PAGO.
§. 1.° *De la quiebra por falta de pago del primer plazo, y sus efectos.*
§. 2.° *Del procedimiento de apremio y quiebra, por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero.*
SEC. VII. DEL DERECHO DE TANTEO EN LAS VENTAS DE BIENES NACIONALES.
SEC. VIII. DE LA SUBROGACION EN HIPOTECAS ESPECIALES DE LAS GENERALES, Á QUE ESTÉN AFECTOS LOS BIENES NACIONALES PUESTOS EN VENTA.
§. 1.° *Casos y forma de la subrogacion.*
§. 2.° *Procedimiento gubernativo para la subrogacion.*
SEC. IX. DE LAS INCIDENCIAS DE VENTAS DE BIENES NACIONALES.
§. 1.° *Nulidad de la venta, y sus efectos.*
§. 2.° *Error en la cosa: ventas de cuerpos ciertos.*
§. 3.° *Error en el precio.*
§. 4.° *Falta de consentimiento.*
§. 5.° *Defectos en las subastas.*
§. 6.° *Nuevas cargas, no rebajadas del capital.*
§. 7.° *Competencia para conocer de las incidencias de ventas.*
§. 8.° *Procedimientos y recursos.*
SEC. X. DE LA VENTA DE CENSOS.
SEC. XI. DE LA VENTA DE MONTES PÚBLICOS.
SEC. XII. DE LA VENTA DE LAS FÁBRICAS DE SALITRE, AZUFRE Y PÓLVORA.
SEC. XIII. DE LA VENTA DE MINAS Y SALINAS DEL ESTADO.
SEC. XIV. DE LA VENTA DE LOS PEQUEÑOS TERRENOS Ó PARCELAS, QUE NO FORMAN SOLARES EDIFICABLES.
SEC. XV. DE LA VENTA DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO DE LA CORONA.
SEC. XVI. DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES EN ULTRAMAR.

SECCION I.

DE LOS BIENES DECLARADOS EN ESTADO DE VENTA, EN CONCEPTO DE NACIONALES: ESCEPCIONES: DIVISION Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS.

Segun se dijo en su lugar correspondiente, *bienes nacionales* son los que corresponden á la nacion. Esta es en efecto la significacion propia y gramatical de esa enunciativa; mas, para los efectos del presente artículo, hay que tomarla y se toma en un sentido mucho mas lato. Compréndense en ella, no solo los bienes raíces y derechos reales, que forman el patrimonio del Estado y son de la propiedad absoluta de la nacion, por haberlos adquirido en virtud de justos y legítimos títulos; sino tambien todos los prédios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes á corporaciones civiles y eclesiásticas y demás manos muertas, que por leyes especiales han sido adjudicados ó entregados al Estado para que proceda á su venta, como medio de realizar la desamortizacion de los mismos. Estos bienes realmente no son de la nacion, puesto que tienen otro dueño reconocido; pero adquirieron el carácter de nacionales desde el momento en que se incautó de ellos la Hacienda pública con el objeto indicado (1).

En el artículo 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 se hizo la descripcion de los bienes, ó mejor dicho, de las corporaciones á quienes

(1) Véase lo que se espuso sobre todos estos bienes en el cap. 3.° del artículo BIENES (tomo 6.°, pág. 523). Véase tambien DESAMORTIZACION.

pertenecian los bienes, que se declaraban en estado de venta, comprendiendo todos los que quedan indicados, y en el 2.° se designaron los que debian esceptuarse de esta medida; y á la vez se dictaron las reglas bajo las cuales habian de verificarse las ventas. Aunque esta ley ha sido modificada en algunos de sus estremos, y aun tambien ampliada por otras posteriores, como es la base de la legislacion vigente, debemos partir de ella en la esposicion de esta materia.

Con arreglo, pues, á las disposiciones indicadas, han sido declarados en estado de venta, la cual ha de realizarse y se viene realizando con los requisitos y solemnidades que se espondrán en la seccion 3.ª, los prédios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes á los institutos y corporaciones que se espresan en los párrafos siguientes. En cada uno de ellos se indicarán tambien las fincas esceptuadas de la venta, haciendo además una reseña de las vicisitudes que ha sufrido la desamortizacion de los bienes á que el párrafo se refiera.

§. 1.° *Bienes del Estado.*

Los bienes pertenecientes al Estado ocupan el primer lugar entre los que declara en estado de venta el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855. Ya anteriormente, por el art. 1.° del Real decreto de 19 de Febrero de 1836, confirmado por la ley de 28 de Julio de 1837, fueron declarados en venta todos los bienes adjudicados á la nacion por cualquiera título ó motivo, y los que en adelante lo fueren, desde la fecha de su adjudicacion. Pero, téngase presente que no se trata de los bienes que constituyen el dominio público ó eminente de la nacion, como las calles, caminos, puertos, rios, etc.: estos bienes no pueden enajenarse miéntras sirvan para el uso público á que están destinados; sino de los que forman el patrimonio ó la propiedad particular del Estado, y consistan en prédios rústicos ó urbanos, censos y foros, como dice la ley citada de 1855 y se confirma en todas las disposiciones posteriores.

En tal concepto los bienes propios del Estado, á cuya enajenacion en pública subasta debe procederse con arreglo á los trámites y solemnidades que se espondrán mas adelante, son los siguientes:

1.° Todos los prédios rústicos y urbanos, censos y foros que viene poseyendo y disfrutando de antíguo el Estado á título de propietario, y los demás que haya adquirido y adquiera por los medios legítimos que reconoce el derecho comun, como los de compra, donacion, legado, adjudicacion en pago de deudas á favor del tesoro público, etc.

2.° Los que no tienen dueño, ó no le tienen conocido, y los detentados sin título legítimo, cuyos bienes suelen designarse con los nombres de *mostrencos, vacantes* y *ab-intestatos*. Pero no puede procederse á la venta de estos bienes sino despues de haber sido declarados del Estado, ó adjudicados al mismo por los trámites que prescribe la ley de 9 de Mayo de 1835. V. **MOSTRENCOS.**

3.° Los baldíos y realengos, pertenecientes al Estado. Por el art. 16 de la ley de 1.° de Agosto de 1851 para el arreglo de la deuda pública, se destinaron á la amortizacion de dicha deuda los realengos y baldíos, mandando se procediera á su enajenacion con las escepciones y en la forma que se estableceria en una ley especial. Aunque por Real órden de 3 del mismo mes se nombró una comision encargada de formular un proyecto de ley para dicha enajenacion, no llegó á tener efecto la publicacion de esta ley, quedando por tanto comprendidos en las disposiciones generales de la de 1.° de Mayo de 1855 (1).

4.° Las murallas, fortificaciones, edificios militares y terrenos pertenecientes al ramo de guerra, que se declaren inútiles para el servicio á que estaban destinados (2).

5.° Las fábricas de salitre, azufre y pól-

(1) V. BALDÍOS: REALENGOS; y como ampliacion, la ley de 6 de Mayo de 1855, aprobando los repartimientos hechos de terrenos baldíos, realengos, comunes y propios; la de 21 de Noviembre del mismo año, sobre establecimiento de colonias agrícolas para reducir á cultivo los baldíos y realengos del Estado, y la de 11 de Julio de 1866 y reglamento de 12 de Agosto de 1867, sobre fomento de la poblacion rural.

(2) Ley de 5 de Mayo de 1856.

vora, con cuanto a ellas pertenezca, inclusos los terrenos y cotos de las mismas fábricas, esceptuándose únicamente las que se consideren necesarias para el servicio de guerra. Así se mandó por la ley de 17 de Junio de 1864, á la vez que se declararon libres en el reino, desde 1.° de Enero de 1865, la fabricacion y venta de la pólvora y materias esplosivas.

6.° Las minas del Estado, menos las de Almaden, únicas esceptuadas por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855. Sin embargo, en el art. 2.° de la de 11 de Julio de 1856 se dijo, que la venta de las minas del Estado seria objeto de leyes especiales, y hasta ahora solo se ha dictado con este objeto la de 25 de Junio de 1870, que acaba de publicarse, por la cual se manda proceder á la venta de las minas de Riotinto.

7.° Las salinas de la Hacienda y las demás fincas y efectos pertenecientes á las mismas, que se hallen aplicados esclusivamente al servicio de la renta, esceptuándose de la venta por ahora las de Torrevieja, Imon y los Alfaques. Así se acordó por la ley de 16 de Junio de 1869, al declarar completamente libres la fabricacion y venta de la sal desde 1.° de Enero de 1870; pero esta escepcion ha quedado limitada á las salinas de Torrevieja, pues por la ley de presupuestos de 8 de Junio de dicho año 1870 se ha antorizado al Gobierno para enajenar las de los Alfaques y de Imon. Por la ley de 1.° de Mayo de 1855 se esceptuaron de la venta todas las salinas.

8.° Y por último, todos los demás bienes inmuebles, que por leyes especiales hayan sido adjudicados al Estado ó declarados de la propiedad de la nacion, como los de la Inquisicion (1); los del secuestro del ex-infante Don Cárlos, colocados en 5.° lugar entre los que designa el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y otros que se hallan en el mismo caso.

Los bienes inmuebles, que quedan reseñados, son los que se consideran como de la propiedad particular del Estado para los efectos de las ventas de que se trata. Deben agregarse á ellos los del patrimonio de la Corona, de que se tratará en el §. 5.° de esta misma seccion. No se hallan en el mismo caso los del clero y demás de que se hará mencion en los párrafos siguientes, pues aunque se reputan tambien como bienes nacionales para dichos efectos, tiene el Estado que asegurar en inscripciones intransferibles de la deuda pública la renta de los mismos á las corporaciones ó particulares á quienes pertenecian, de suerte que no los adquiere el Estado sino mediante esta conmutacion, ó sea dando inscripciones de la renta perpétua al 3 por 100 en cambio de los bienes.

Escepciones. Además de las indicadas anteriormente respecto de las fábricas de pólvora, minas y salinas, por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, se esceptuaron de la venta de los bienes del Estado *los edificios y fincas destinados*, ó que el Gobierno destinare *al servicio público*, y cualesquiera otros, cuya venta no crea este oportuna por razones graves, y los *montes* y *bosques* cuya venta no sea conveniente á juicio del propio Gobierno. A este fin se dictaron varias disposiciones para hacer la clasificacion de los montes, que pueden verse en la sec. 3.° de la *parte legislativa*, habiéndose mandado últimamente por el art. 12 de la ley de presupuestos de 29 de Mayo de 1868, que se procediera desde luego á la venta de los montes del Estado, esceptuados de la desamortizacion, reservando solamente los que tengan reconocida importancia por declaracion facultativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con los de Hacienda y Marina. V. MINAS: MONTES: SALINAS.

§. 2.° *Bienes del clero; de las órdenes militares; de cofradías, obras pías y santuarios, y demás manos muertas eclesiásticas.*

Entre los bienes declarados en estado de venta por el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, ocupan el segundo lugar los pertenecientes *al clero*, comprendiéndose en ellos, tanto los del clero secular, como los del regular de ambos sexos, y tambien los que esta-

(1) Decreto de las Córtes de 22 de Febrero de 1813, y Real decreto de 15 de Julio de 1834.

han destinados á las atenciones del *culto*: en tercer lugar se designaron los pertenecientes *á las cuatro órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, y á la de San Juan de Jerusalen*; y en cuarto, los pertenecientes *á cofradías, obras pías y santuarios*. Vamos á tratar de todos ellos en el presente párrafo por su carácter especial de proceder de manos muertas eclesiásticas, y por serles comunes muchas de las disposiciones que hemos de examinar.

De todos los bienes pertenecientes á manos muertas, ningunos han sufrido tantas vicisitudes en su desamortizacion como los anteriormente indicados, efecto sin duda de la índole é importancia de las corporaciones á que pertenecian, y de las ideas políticas que se han sucedido en la gobernacion del Estado. No debemos entrar ahora en el exámen de estas causas, por ser materia propia de otros artículos: en el presente solo debemos tratar de lo que tenga relacion con la venta de tales bienes, y á esto vamos á limitarnos, principiando con una ligera reseña de las disposiciones que para ello se han dictado en estos últimos tiempos. Véase además el artículo **BIENES SECULARIZADOS**.

Las primeras disposiciones recayeron sobre los bienes de la órden de regulares de la Compañía de Jesus. Por Real decreto de 4 de Julio de 1835 se restableció en su fuerza y vigor la célebre pragmática-sancion de 2 de Abril de 1767, en cuanto por ella se suprimió en toda la Monarquía la espresada órden, y se ocuparon sus temporalidades, revocando y anulando por consiguiente el Real decreto de 29 de Mayo de 1815, por el que se mandó restablecer dicha Compañía, que tambien habia sido revocado por decreto de las Córtes de 17 de Agosto de 1820, y á la vez se ordenó que los bienes de la misma se aplicaran á la estincion de la deuda nacional.

Por otro decreto de las Córtes de 1.° de Octubre de 1820, que, como el anterior, quedó sin efecto al restablecimiento del régimen absoluto en 1823, se suprimieron todas las órdenes monacales y varios conventos é institutos religiosos, inclusos los de las órdenes militares y hospitalarias, mandando proceder á la venta de sus bienes con la misma aplicacion antes indicada. Por Real decreto de 3 de Setiembre de 1835 se restablecieron á su fuerza y vigor, y al estado que tenian el dia 30 de Setiembre de 1823, las ventas hechas á nombre del Estado en virtud de aquella disposicion. A la vez se suprimieron, primero, por Real decreto de 25 de Julio de 1835, los monasterios y conventos de religiosos que no tuvieran 12 individuos profesos; y despues, por otro Real decreto de 11 de Octubre del propio año, todos los monasterios de órdenes monacales, los de canónigos seglares de San Benito, los de San Agustin y otros, ampliándose la medida en 8 de Marzo de 1836 á todos los institutos religiosos de varones, con las escepciones que luego se indicarán; y en su consecuencia, por otro Real decreto de 19 de Febrero de 1836, se declararon en venta todos los bienes raices que hubiesen pertenecido á las comunidades y corporaciones religiosas estinguidas, y se dictaron reglas para llevar á efecto estas ventas y aplicar sus productos á la estincion de la deuda pública, como puede verse en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*. Estas disposiciones fueron aprobadas y confirmadas por la ley de 28 de Julio de 1837.

Aun se llevó mas adelante la reforma en aquel período constituyente. Por otra ley, promulgada en 29 del mismo mes de Julio de 1837, se declararon estinguidos en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos *de ambos sexos*, esceptuándose únicamente los colegios de misioneros para las provincias de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo, y autorizando al Gobierno para que, donde lo juzgara necesario, conservara algunas casas de escolapios, no como comunidades religiosas, sino como establecimientos de instruccion pública dependientes del mismo Gobierno; y lo propio, y tambien como establecimientos civiles de hospitalidad, algunas casas de los antiguos conventos hospitalarios, de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul y de beatas dedicadas á la hospitalidad y en-

señanza. Se permitió á las religiosas profesas, que no quisieran exclaustrarse, la continuacion en sus conventos; pero debiendo suprimirse los que tuvieran menos de doce religiosas, y no permitiéndose en una misma poblacion mas de un solo convento de la misma órden. Y como consecuencia de estas medidas se ordenó á la vez, que todos los bienes raices, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos, inclusas las que quedaban abiertas, se aplicaran á la Caja de amortizacion para la estincion de la deuda pública, sin perjuicio de las cargas de justicia que tuvieran sobre sí, esceptuándose por entonces los pertenecientes á los colegios de mision para las provincias del Asia, á la obra pia de los Santos lugares de Jerusalen, al monasterio del Escorial que pertenecieran al Real patrimonio, y los dedicados especialmente á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública.

Como resulta de lo espuesto, en aquellas primeras medidas desamortizadoras, llevadas á efecto revolucionariamente, se respetaron los bienes del clero secular; pero poco despues fueron tambien objeto de las mismas. Por una ley, promulgada en 2 de Setiembre de 1841, se declararon bienes nacionales todas las propiedades del clero secular, en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistieran, de cualquiera orígen y nombre que fuesen, y con cualquiera aplicacion ó destino que hubiesen sido donadas, compradas ó adquiridas, como tambien las correspondientes á las fábricas de las iglesias y á las cofradías, y se pusieron en venta todos estos bienes. Se esceptuaron, sin embargo, los pertenecientes á prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo ó pasivo; los de cofradías y obras pias procedentes de adquisiciones particulares para cementarios y otros usos privativos á sus individuos; los dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública; los edificios de las iglesias; el palacio morada de cada prelado, y la casa habitacion de los párrocos y tenientes, con sus huertos ó jardines adyacentes.

Como todas estas disposiciones se adoptaron por el Gobierno sin el acuerdo de la Santa Sede, natural era que al ser llamados al poder hombres de ideas mas templadas procurasen legalizar aquella situacion y tranquilizar las conciencias. Para preparar un concordato con este objeto, se principió por suspender la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades religiosas de monjas: así se acordó por Real decreto de 26 de Julio de 1844. Poco despues se promulgó la ley de 3 de Abril de 1845, por la cual se devolvieron al clero secular los bienes del mismo que no habian sido enajenados; y por Real órden de 11 del propio mes y año se mandó suspender la venta de los edificios conventos de las comunidades religiosas suprimidas, si bien por otra de 30 de Octubre de 1849 se dispuso que se enajenaran á censo los que no se utilizaran para el culto y estuvieran ruinosos.

Encontradas disposiciones se dictaron á la vez respecto á los bienes procedentes de ermitas, santuarios y cofradías. Por Real órden de 24 de Setiembre de 1845 se acordó, que no habiendo pertenecido estos bienes al clero secular, no debian incluirse en la devolucion acordada por la ley de 3 de Abril del propio año, antes citada; pero en oposicion á esto, por otra Real órden de 20 de Abril de 1846 se declararon nulas las ventas de dichos bienes que se hubieren verificado con posterioridad al Real decreto de 26 de Julio de 1844, por el que se mandó suspender la venta de los bienes del clero. Por Real decreto de 23 de Setiembre de 1847 se mandó de nuevo la venta de tales bienes, y se volvió á suspender por otro de 10 de Octubre siguiente. Lo propio sucedió en el siguiente año 1848: por Real decreto de 7 de Abril se mandó proceder á la venta de todos los bienes raices, censos, rentas, derechos y acciones procedentes de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, conforme á la ley de 2 de Setiembre de 1841; y por otro de 11 de Julio se ordenó suspender su ejecucion.

Igual suerte corrieron los bienes de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Por el citado Real de-

creto de 7 de Abril de 1848, se mandó proceder á la venta de todos los bienes raices, acciones, derechos y censos procedentes de las encomiendas vacantes de dichas órdenes, maestrazgos y edificios-conventos, reputándolos como propiedad de la nacion con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 19 de Febrero de 1836, confirmado por la ley de 28 de Julio de 1837; y tambien se acordó la suspension de estas ventas por el de 11 de Julio del propio año 1848.

En cuanto á la órden de S. Juan de Jerusalen, por Real decreto de 1.° de Mayo de 1848 se declararon en venta todos los bienes raices, censos, rentas, derechos y acciones, procedentes de las encomiendas de dicha órden; y por otras disposiciones de 6 y 21 de Setiembre de 1850, 27 de Febrero, 7 de Marzo y 28 de Abril de 1851 se dictaron varias reglas para facilitar y llevar á efecto la enajenacion de tales bienes.

Asi las cosas, se celebró el concordato de 16 de Marzo de 1851, que se mandó publicar y observar como ley del Estado por la de 17 de Octubre del propio año. Antes de su publicacion, se dispuso por Real órden de 13 de Mayo de aquel mismo año, que ínterin se acordaba lo correspondiente para llevarlo á efecto, se suspendiera desde luego la venta y redencion de los bienes, censos y demás pertenencias procedentes de las estinguidas comunidades regulares de ambos sexos, clero secular, ermitas, santuarios, hermandades y cofradías. Realmente no se hizo mas que confirmar lo que ya estaba mandado, incluyendo en la medida los bienes de las comunidades regulares de varones, que se habian seguido vendiendo.

Por el art. 35 de dicho concordato, se convino en que se devolverian desde luego á las comunidades religiosas de mujeres, y en su representacion á los respectivos prelados diocesanos, los bienes de su pertenencia que estaban en poder del Gobierno y aun no habian sido enajenados. Se convino asímismo por el artículo 38, que se devolvieran tambien á la Iglesia todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la ley antes citada de 3 de Abril de 1845 y que todavia no hubieran sido enajenados, inclusos los que restaran de las comunidades religiosas de varones, y los de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares. Se declaró que todos los espresados bienes pertenecian en propiedad á la Iglesia, y en su nombre se disfrutarian y administrarian por el clero; pero teniendo Su Santidad en consideracion el estado actual de los mismos y otras particulares circunstancias, dispuso que los prelados diocesanos procedieran inmediatamente á la venta de dichos bienes por medio de subastas públicas, hechas en la forma canónica y con intervencion del Gobierno, y que su producto se convirtiera en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado del 3 por 100.

A la vez se obtuvo de la benignidad del Santo Padre la aprobacion y saneamiento de las ventas de bienes eclesiásticos hechas hasta entonces. Por el art. 42, Su Santidad, á instancia de S. M. Católica, para proveer á la tranquilidad pública, decretó y declaró que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á la sazon vigentes, no serán molestados en ningun tiempo ni manera, antes bien así ellos, como sus causa-habientes, disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus productos.

En 9 de Diciembre del propio año 1851 se espidió un Real decreto por el Ministerio de Gracia y Justicia dictando reglas para la ejecucion del concordato en lo relativo á la enajenacion de las fincas, censos, derechos y acciones devueltos al clero como de su propiedad; y para darle el debido cumplimiento por parte de la Hacienda, se dictaron tambien las disposiciones oportunas por el Ministerio de este ramo en Real órden de 16 de Abril de 1853, que fué circulada por el de Gracia y Justicia á los prelados diocesanos en 30 del mismo mes.

Cuando ya se estaba ejecutando el solemne convenio, celebrado entre la potestad civil y la eclesiástica sobre tan importante materia, vinieron nuevas Córtes constituyentes por consecuencia del cambio político ocurrido en 1854, y por la ley de 1.° de Mayo de 1855

decretaron la desamortizacion general, civil y eclesiástica. Por el art. 1.° de esta ley se declararon en estado de venta, con arreglo á las prescripciones de la misma, todos los prédios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes en general á manos muertas, ya estuviesen ó no mandados vender por leyes anteriores, designándose especialmente, entre otros, los pertenecientes al clero, á las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava Montesa, y S. Juan de Jerusalen, y á cofradías, obras pías y santuarios. Unicamente se esceptuaron por el art. 2.°, el palacio ó morada de cada uno de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos; las rectorías ó casas destinadas para habitacion de los curas párrocos, con los huertos ó jardines á ellos anejos; las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías, y los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas á la instruccion pública, durante la vida de sus actuales poseedores.

Aclarando y aun ampliando estas disposiciones, las mismas Córtes constituyentes, por el art. 3.° de la ley de 15 de Junio de 1856, declararon comprendidos en la citada ley de 1.° de Mayo del año anterior los bienes de capellanías colativas, cuya adjudicacion no hubiere sido reclamada por los que tenian derecho á ello, fijando á este fin el plazo de 20 años, contados desde la publicacion de la ley de 19 de Agosto de 1841, trascurridos los cuáles perderian todo derecho los interesados, y se trasmitiria á los siguientes en grado, que deberian ejercitarlo dentro de los cuatro años siguientes. Esta materia quedó despues subordinada á lo establecido en el convenio celebrado con la Santa Sede en 16 de Junio de 1867, sobre capellanías colativas.

Y por el art. 3.° de otra ley de 11 de Julio del mismo año 1856, se declararon comprendidos entre los bienes del clero, mandando proceder á su venta, todos los pertenecientes ó que se hallaban disfrutando los individuos y corporaciones eclesiásticas, cualquiera que fuese su nombre, orígen, ó cláusulas de su fundacion, á escepcion de las capellanías colativas de sangre ó patronatos de igual naturaleza.

Es de notar en estas leyes que no declararon *nacionales* los bienes, como se hizo en las anteriores de 1836 á 1841; sino que, respetando la propiedad de las corporaciones é individuos á quienes pertenecian, mandaron venderlos para convertir su importe en inscripciones intransferibles de la deuda pública del 3 por 100, asegurandoles así la renta de los mismos. Por esto decian los legisladores de 1855, que ellos no atacaban el derecho de propiedad, pues se limitaban á cambiar la forma de ésta, en uso de la soberanía de la nacion, por causa de utilidad pública. Y conforme á ese mismo principio aseguraron la renta de los bienes durante su vida, en dichas inscripciones de la deuda, á los poseedores de beneficios y otras fundaciones eclesiásticas, que constituyesen la cóngrua sustentacion de los interesados, y á los actuales comendadores de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y de la de S. Juan de Jerusalen (1).

Habiendo ocurrido dudas acerca de si las fincas y censos correspondientes á la obra pía de los Santos lugares de Jerusalen estaban ó no comprendidos en la ley de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855, se resolvieron en sentido afirmativo, mediante á que el artículo 1.° de dicha ley, al tratar de los bienes que se declaraban en estado de venta, mencionaba, entre otros, los pertenecientes á *obras pías*, y en las escepciones del art. 2.° no resultaban espresados los bienes de aquella. En su consecuencia se dictó el Real decreto de 13 de Setiembre del propio año, por el que se declararon en estado de venta y redencion las fincas y censos pertenecientes á dicha obra pía, mandando se procediera con sujecion á los trámites establecidos en la citada ley de 1855 y en la instruccion de 31 del mismo mes de Mayo.

Se dictaron por consiguiente las disposiciones oportunas para que la Hacienda pública se incautara bajo inventario de los bienes del clero y demás de que queda hecha mencion, y se procediera á su venta, como así se

(1) Arts. 3.° y 4.° de la ley de 11 de Julio de 1856.

verificó. Pero todo ello fué transitorio, como la situacion política que lo habia creado. Por Real decreto de 23 de Setiembre de 1856 se mandó lo que sigue: «Se suspende, hasta que se resuelva lo que corresponda en la forma conveniente, la venta de los bienes del clero secular, devueltos al mismo conforme á la ley de 3 de Abril de 1845.» Y por otro de 14 de Octubre siguiente se mandó suspender la ejecucion de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y que no se sacara á pública subasta finca alguna de las que dicha ley ordenaba poner en venta, ni se aprobaran las que se hallasen pendientes.

Aun se adoptó otra medida mas radical y absoluta respecto á los bienes y materias de carácter eclesiástico. Por Real decreto de 13 del mismo Octubre de 1856 se dejaron sin efecto todas las disposiciones, de cualquiera clase que fuesen, que de algun modo derogaran, alterasen ó variasen lo convenido en el concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo de 1851. Decia el Consejo de Ministros en la esposicion que precede á este decreto: «El concordato celebrado con la Santa Sede por el Gobierno de V. M., debidamente autorizado por la ley de 8 de Mayo de 1849, y ratificado en 1.° de Abril de 1851, es á la vez una ley importantísima del Estado, y un acto con toda la fuerza de un tratado internacional. Bajo este último concepto, sus disposiciones no pueden ser válidamente derogadas ni alteradas sin el concurso y consentimiento de las dos altas partes contratantes.»

En tal estado siguieron las cosas respecto de los bienes eclesiásticos, hasta que en 4 de Abril de 1860 se publicó como ley el nuevo convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859. Las disposiciones de este convenio, en lo que se refiere al asunto de que tratamos, están reducidas á respetar en la Iglesia la propiedad de sus bienes, facilitar la venta de los mismos para evitar los inconvenientes de la amortizacion, y asegurar á la vez de una manera independiente la dotacion del culto y clero. Así es que el Gobierno de S. M. Católica prometió en él á la Santa Sede que sin la necesaria autorizacion de la misma no se haria en adelante ninguna venta, conmutacion, ni otra especie de enajenacion de los bienes eclesiásticos: reconoció de nuevo el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad, y sin limitacion ni reserva, toda especie de bienes y valores, derogando en cuanto á ello se oponga la ley de 1.° de Mayo de 1855; y la reconoció tambien como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el concordato de 1851.

A su vez la Santa Sede accedió á la permutacion de los bienes de la Iglesia, que propuso el Gobierno español, por inscripciones intransferibles del 3 por 100 de la deuda pública consolidada, en valor nominal igual al de los bienes, segun la estimacion del precio de aquellos hecha por los obispos, de acuerdo con sus cabildos. Y para llevar á efecto esta permutacion se convino en que, hecha por los obispos la estimacion de los bienes, el Gobierno les entregaria inmediatamente títulos ó inscripciones intransferibles, así por el completo valor de los mismos bienes, como por el valor venal de los que habian sido enajenados despues del concordato; y verificada esta entrega, los obispos harian al Estado formal cesion de dichos bienes, para lo cual los autorizaba competentemente la Sede Apostólica. Por este medio el Estado adquiere legítimamente y á título oneroso traslativo de dominio los bienes de la Iglesia, y puede disponer de ellos como de cosa propia.

Se eximieron de dicha permutacion, quedando en propiedad á la Iglesia, y sin imputarse en la dotacion para el culto y clero, los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos; las casas destinadas á la habitacion de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo la denominacion de *iglesarios*, *mansos* y otras; los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos; las bibliotecas, y las casas de correccion ó cárceles eclesiásticas; y en general todos los edificios que sirven para el culto, y los que se hallaban destinados al uso y habitacion del clero regular de ambos sexos, así como los que en

adelante se destinaran á tales objetos. Tambien se dispuso que si en alguna diócesis estimare el obispo que por particulares circunstancias convenia á la Iglesia retener alguna finca sita en ella, tal finca podria eximirse de la permutacion, si bien imputándose el importe de su renta en la dotacion del clero.

Y por último, en vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultaban á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de S. M. Católica, acordó estender, como de hecho estendió, el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del concordato á los bienes eclesiásticos enajenados á consecuencia de la referida ley de 1.° de Mayo de 1855. Así se consignó en el art. 20 del citado convenio, quedando en su virtud aprobadas por la autoridad competente las enajenaciones de bienes eclesiásticos, hechas despues del concordato de 1851, con infraccion del mismo.

Por Real decreto de 21 de Agosto de 1860, espedido por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y el Nuncio apostólico, se dictaron las disposiciones oportunas para la ejecucion de dicho convenio, dándose reglas para los inventarios y estimacion de los bienes eclesiásticos, hasta llevar á efecto la permutacion de los mismos por inscripciones intransferibles de la deuda consolidada del 3 por 100, quedando en virtud de la cesion canónica como bienes del Estado para proceder á su venta. Y por la ley de 7 de Abril de 1861 se dispuso que dichos bienes continuaran enajenándose, las fincas rústicas y urbanas con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, y los censos segun la de 11 de Marzo de 1859.

Por consecuencia de las anteriores disposiciones los bienes eclesiásticos han pasado á ser propiedad de la nacion, y en tal concepto se procede á su venta; pero debiendo preceder á este acto la formal cesion de los mismos, hecha por los prelados diocesanos, en virtud de la autorizacion que para ello les ha concedido la Santa Sede. Así es que para la venta de los bienes eclesiásticos de cada diócesis, se dicta por el Ministerio de Hacienda una órden particular luego que se realiza dicha cesion, espresando en ella los bienes esceptuados de la permutacion, y que desde la publicacion de la misma empiezan á correr los ocho meses que para la redencion de los censos se señalan en la ley de 11 de Marzo de 1859, con arreglo á la cual deberán redimirse y enajenarse, segun lo prevenido en la de 7 de Abril de 1861. (1).

En la antigua corona de Aragon existen comunidades de beneficiados, dotados con bienes propios, cuya índole especial ofrecia dificultades para la permutacion. Las dudas suscitadas sobre el carácter de estos bienes quedaron resueltas en el nuevo convenio, celebrado con la Santa Sede en 16 de Junio de 1867, sobre capellanías colativas. En su artículo 22 se declaró que dichas comunidades serian objeto de otro convenio especial, sin hacerse novedad en ellas hasta el arreglo parroquial; pero que los bienes, censos y demás derechos reales que constituyen su dotacion, se conmutaran, en la forma que prescribe el convenio de 1859, en inscripciones instransferibles de la deuda consolidada del 3 por 100, que se entregarian á la respectiva comunidad

(1) Segun una *Memoria* presentada al Ministro de Hacienda por el Director general de propiedades y derechos del Estado en 27 de Junio de 1868, hasta el 31 de Diciembre anterior se habia llevado á efecto en 57 diócesis la permutacion de los bienes eclesiásticos por inscripciones de la deuda del 3 por 100, que se habian entregado á los prelados, importando dichas inscripciones las cantidades siguientes:

	Escudos. Milésimas.
Por bienes del clero	101.976 711,516
Por idem de monjas.	21.039.607,468
Por idem de cofradías.	7.690.282,367
Total de escudos.	130.706.601,381

En las seis diócesis restantes estaban muy adelantados los trabajos para llevar á efecto la permutacion, realizada despues en casi todas ellas, y la importancia de sus bienes estaba calculada en 8.012,131 escudos 835 milésimas.

En el estado en que se consignan dichos datos aparece en blanco el importe de los bienes correspondientes á la diócesis de Valencia, lo que hace presumir que no era aun conocido con exactitud, y que deberá aumentarse á las sumas anteriores.

á que pertenecieran los bienes. Y en la instruccion dictada en 25 del propio mes de Junio por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Nuncio apostólico, para la ejecucion de dicho convenio, se dieron reglas para llevar á efecto la permutacion y cesion canónica de los indicados bienes, existentes todavía en poder de las comunidades, previniéndose que no se procediera á la venta de los que conservaba el Gobierno en su poder, sin que antes se espidieran las inscripciones intransferibles correspondientes. Quedaron, pues, estos bienes para su venta en iguales condiciones que los demás del clero.

En resúmen: todos los bienes que pertenecieron á manos muertas de carácter eclesiástico, escepto los de capellanías colativas, y los demás indicados anteriormente, han pasado al dominio de la nacion, en virtud de la permutacion convenida con la Santa Sede, y se hallan en estado de venta luego que se verifica la cesion canónica de los mismos (1). En este caso se encuentran:

1.° Todos los bienes procedentes del clero secular, salvas las exenciones indicadas; los de comunidades religiosas de varones; los de las fábricas de las iglesias; los de las comunidades de beneficiados; los de capellanías eclesiásticas, escepto las colativas ó de sangre que no hayan caducado, y los patronatos de igual naturaleza; y los de ermitas y santuarios y demás manos muertas eclesiásticas, que no tuvieran un objeto especial. Los productos de estos bienes, ó sean las inscripciones de la deuda dadas en permutacion de los mismos, deben aplicarse á la dotacion del clero y del culto.

2.° Los bienes procedentes de las comunidades de religiosas. Las inscripciones que los representan deben destinarse al pago de las pensiones de las monjas, que tengan derecho á percibirlas del Estado, y á los gastos del culto y demás necesidades de sus conventos.

3.° Los procedentes de cofradías, obras pías, inclusa la de los Santos lugares de Jerusalen, y demás fundaciones piadosas eclesiásticas, que tengan un objeto especial. Las inscripciones dadas en cambio de estos bienes deben destinarse á cubrir las obligaciones de las corporaciones respectivas.

Y 4.° Los de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, vacantes y que vacaren. El producto de estos bienes debe aplicarse tambien á la dotacion del culto y clero, como el de los demás espresados en el número 1.° Mientras no vaquen, no pueden tener esta aplicacion, mediante á que sus rentas pertenecen á sus actuales poseedores. No es esto obstáculo para la enajenacion: á los actuales poseedores se les asegura la renta de la encomienda ó maestrazgo en inscripciones intransferibles vitalicias.

En cuanto á los bienes de las encomiendas de la órden de S. Juan de Jerusalen, resulta que siguen sujetos á las prescripciones de la ley de 1.° de Mayo de 1855 y disposiciones posteriores, como se declaró en Real órden de 8 de Diciembre de 1860, mediante á que no fueron adjudicados al clero por el concordato de 1851, ni en los convenios posteriores. De consiguiente, solo tendrán esta aplicacion los bienes procedentes de las iglesias de dicha órden.

Como ampliacion de esta materia véanse en la seccion 1.° de la *parte legislativa* los números 3.°, 6.° y 7.° del art. 8.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856.

Cuando estaba ya legítimamente arreglado todo lo perteneciente á la desamortizacion de los bienes eclesiásticos, y saneadas las ventas hechas sin la necesaria autorizacion de la potestad eclesiástica, una nueva perturbacion ha sobrevenido en esta materia, á consecuencia del cambio político verificado por la revolucion de Setiembre de 1868. Sin embargo de los pactos solemnes celebrados ultimamente con la Santa Sede y sancionados como leyes del Estado, el Gobierno provisional, por decreto de 12 de Octubre de dicho año, acordó la supresion en la Península é islas adya-

(1) Para que puedan venderse estos bienes y redimirse los censos es requisito indispensable el que haya precedido la cesion canónica de los mismos á favor del Estado. (*Sent. de la Sala tercera del Trib. Sup. de Just. de 10 de Abril de 1869.*)

centes de la órden regular de la Compañía de Jesús, y la ocupacion de todos sus bienes raíces y muebles, que pasarian á formar parte del caudal de la nacion. Y por otro decreto de 18 del propio mes, declaró estinguidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados desde 29 de Julio de 1837 en adelante; y mandó reducir á la mitad los conventos y demás casas de religiosas, que quedaron subsistentes por la ley de la citada fecha, y que los edificios y bienes de las comunidades suprimidas pasaran igualmente á ser propiedad del Estado. Se derribaron á la vez varias iglesias, de cuyos solares, como asimismo de los bienes antes indicados, ha debido incautarse la Hacienda para aumentar el caudal desamortizable, y proceder por tanto á su venta, segun se dispuso en órden de 19 de Noviembre del propio año.

Ultimamente, por un decreto del Regente del Reino de 8 de Diciembre de 1869 se ordenó que la Hacienda se incautara desde luego de los bienes de las comunidades de beneficiados existentes en la antígua corona de Aragon, y que se procediera á la enajenacion de los mismos, sin perjuicio de que se espidan, luego que sea conocida su verdadera renta, las correspondientes inscripciones intransferibles en equivalencia de dichos bienes, segun está prevenido. En este decreto se ha prescindido tambien de lo concordado con la Santa Sede sobre tales bienes en el convenio de 1867, y se sacan á la venta sin haber precedido la permutacion y cesion canónica de los mismos.

No se ha hecho novedad respecto de los demás bienes eclesiásticos, ni habia para qué hacerla, toda vez que, cedidos ya formalmente al Estado, este puede disponer de ellos legítimamente y seguir vendiéndolos, segun estaba prevenido.

Téngase presente, por último, que las cargas que pesan sobre la propiedad particular, conocidamente aplicables á cubrir misas, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales, no están comprendidos en las leyes de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, como se declaró por Real órden de 3 de Mayo de 1859, que puede verse en la seccion 2.ª de la *parte legislativa*.

§. 3.° *Bienes de propios y comunes de los pueblos.*

En su lugar correspondiente se dijo ya lo que son *bienes de propios* y *bienes comunes* de los pueblos, y aún volverá á tratarse de ellos con más estension. Limitándonos aquí al objeto del presente artículo, debemos recordar que unos y otros bienes fueron declarados en estado de venta por el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, ocupando el sesto lugar de los que en él se relacionan. Desde esta ley se venden dichos bienes en igual forma que los demás del Estado, no siendo ya aplicables á los mismos las varias disposiciones que se habian dictado anteriormente para su enajenacion por los ayuntamientos, como bienes de su propiedad, la última de ellas el Real decreto de 28 de Setiembre de 1849. V. **PROPIOS.**

El producto de los bienes de propios estaba destinado á cubrir las cargas de la respectiva municipalidad, escepto el 20 por 100 que ingresaba en el tesoro público, y que despues se aplicó á la amortizacion de la deuda del Estado por el art. 16 de la ley de 1.° de Agosto de 1851. Y por Real decreto de 10 de Setiembre de 1852 se mandó reservar tambien para el Estado, con dicha aplicacion, el 20 por 100 de todas las enajenaciones de los bienes de propios, rústicos ó urbanos, hechas con arreglo al citado decreto de 1849. Partiendo de estas bases las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, declararon pertenecer al Estado el 20 por 100 de los bienes de propios, dándole la misma aplicacion que al producto en venta de los demás bienes del Estado; y el 80 por 100 restante á los ayuntamientos respectivos, debiendo convertirse en inscripciones intransferibles de la deuda consolidada al 3 por 100, á fin de que con sus intereses cubrieran los pueblos las obligaciones á que atendian con los productos de sus propios. Varias disposiciones se han dictado despues para la emision y entrega de dichas inscripciones, y pago de sus intereses,

de las que no hacemos aquí mencion por no corresponder á este artículo.

Para mayor aclaracion de esta materia, en el núm. 4.° del art. 8.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856 se dijo, que el 20 por 100 de propios es la parte que corresponde al Estado en las ventas que se hagan de los bienes de las corporaciones municipales, afectos á satisfacer tambien al Estado el 20 por 100 de sus productos en renta hasta la fecha de su enajenacion; y que dicho 20 por 100 debe enajenarse en union con el 80 correspondiente á los pueblos, y espedirse los pagarés á plazo con la debida distincion de la parte respectiva al Estado y á los pueblos.

Respetando tambien la ley el uso á que estaban destinados los bienes comunes, que era al comun aprovechamiento de todos los vecinos del pueblo, por el art. 2.° de la de 1.° de Mayo de 1855 se esceptuaron de la venta los terrenos que eran entónces de aprovechamiento comun, prévia declaracion de serlo hecha por el Gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputacion provincial respectivos, y tambien al Consejo de Estado cuando no se conformare con el parecer de estas corporaciones. Y además, por el art. 1.° de la ley de 11 de Julio de 1856 se esceptuó igualmente la dehesa destinada, ó que se destinare de entre los demás bienes del pueblo, al pasto del ganado de labor de la misma poblacion, caso de no tenerla esceptuada en virtud del art. 2.° de la de 1.° de Mayo antes citado, correspondiendo al Gobierno fijar la estension de la dehesa que hubiera de conservarse, atendidas las necesidades de cada pueblo, oyendo tambien al ayuntamiento y á la diputacion provincial.

En el art. 1.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856 se dictaron reglas para estas reclamaciones de escepcion, que se ampliaron por el Real decreto de 10 de Julio de 1865, declarándose á la vez que el derecho de los ayuntamientos á reclamar las escepciones acerca de terrenos de aprovechamiento comun ó dehesa boyal, solo podrá ejercitarse respecto de las fincas que no hayan sido enajenadas, y hasta el acto del remate. Además de que pueden verse estas disposiciones en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*, debemos reservar su esposicion y las de otras dictadas sobre la propia materia para sus artículos respectivos. V. **COMUNES: DEHESA BOYAL.**

Además de los bienes de propios y comunes, están tambien declarados en estado de venta, y sujetos á las prescripciones antes indicadas, todos los demás que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y á los pueblos (1).

§. 4.° *Bienes de beneficencia y de instruccion pública.*

Estos bienes fueron respetados hasta la ley de 1.° de Mayo de 1855. En las disposiciones anteriores sobre desamortizacion no se hizo mencion de ellos sino para esceptuarlos. Al aplicarse á la caja de amortizacion para la estincion de la deuda pública los bienes de todas las comunidades religiosas de ambos sexos por la ley de 29 de Julio de 1837, se esceptuaron los que se hallasen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública. Y la propia escepcion se hizo por la ley de 2 de Setiembre de 1841, respecto de los bienes del clero secular y de cofradías, destinados á dichos objetos. No hablamos aquí de las ventas decretadas á fines del siglo pasado: sobre ellas véase el artículo **BIENES VENDIDOS DE HOSPITALES, ETC.**

Siendo el objeto de la ley antes citada de 1855 la desamortizacion general de todos los bienes pertenecientes á manos muertas civiles y eclesiásticas, lógico era que comprendiera tambien los de beneficencia é instruccion pública, como los comprendió, colocándolos en 8.° y 9.° lugar entre los declarados en estado de venta por el art. 1.° Unicamente se esceptuaron por el 2.° los edificios que ocupaban en aquella fecha los establecimientos de beneficencia é instruccion pública.

En dichos bienes están comprendidos tambien los de patronatos particulares, destinados á objetos de beneficencia, como se decla-

(1) Art. 10, núm. 4.° de la ley de 11 de Julio de 1856.

ro por Real órden de 21 de Agosto de 1865, que puede verse en la sec. 1.ª de la *parte legislativa*. Fundóse esta Real órden en la declaracion hecha por Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 14 de Enero de 1864, en pleito entablado por D. José María Fernandez Fenllado contra la Administracion general del Estado, sobre subsistencia ó revocacion de una Real órden, por la que se denegó la escepcion de venta de los bienes del hospital fundado en Rute por D. Alfonso de Castro Gomez, solicitada por aquel como administrador y patrono de sangre: se confirmó la Real órden, absolviendo de la demanda á la Administracion (1).

(1) Dicho Real decreto-sentencia de 14 de Enero de 1864 contiene los considerandos que siguen:

«Considerando que las fincas con que D. Alfonso de Castro Gomez dotó al Hospital que fundó en la villa de Rute, son propiedad esclusiva de éste, y por lo tanto, bienes de beneficencia poseidos por mano muerta.

Considerando que la ley de 1.º de Mayo de 1855 al determinar la venta de los bienes de beneficencia, no distingue entre los establecimientos de esta clase de carácter público y los que lo tienen de establecimiento particular, segun la ley de 20 de Junio de 1849:

Considerando que las dos leyes antes citadas no son inconciliables en sus disposiciones en lo que se refieren á la cuestion de este pleito, pues que sin perder el hospital de Rute su carácter de establecimiento particular que le está declarado, y conservándose por lo mismo los derechos que la fundacion da á los patronos, pueden venderse las fincas, sustituyéndose á los bienes raices de su propiedad las inscripciones que representen su valor:

Considerando, por último, que si otra cosa se entendiera, no pudiéndose disponer de dichos bienes con sujecion á la ley de desvinculacion de bienes amayorazgados, por no ser de propiedad particular, ni venderse conforme á la de 1.º de Mayo, quedarian perpétuamente amortizados contra el espíritu de todas las disposiciones que tienden á la libre trasmision de la propiedad raiz, salvo los casos espresamente esceptuados.»

Iguales declaraciones se hicieron en otros decretos-sentencias del Consejo de Estado de 2 de Mayo de 1866, y 30 de Enero del 1868, estableciéndose además en el último, que la denominacion de *manos muertas* «la constituye precisamente la prohibicion de vender, permutar y enajenar los bienes.»

Igual jurisprudencia se halla establecida respecto de los bienes de establecimientos destinados á instruccion pública, como puede verse en el decreto-sentencia del Consejo de Estado, de 10 de Octubre de 1868, dictado en pleito promovido por el Rector y Síndico del Real colegio de Corpus-Christi de Valencia.

Pero cuando el patronato particular, ó institucion de beneficencia ó de instruccion pública, no contiene claramente la prohibicion de enajenar los bienes que lo constituyen, como en tal caso no se hallan estos amortizados, no deben considerarse comprendidos en las disposiciones de que tratamos para el efecto de ser vendidos por el Estado en concepto de bienes nacionales, y convertir su producto en inscripciones intransferibles de la deuda (1).

Por los arts. 20 y 21 de la citada ley de 1.º de Mayo se dispuso que el producto íntegro de la venta de los bienes de beneficencia y de instruccion pública, si las respectivas corporaciones no hubieren solicitado y obtenido otra inversion, se destinara á comprar títulos de la deuda consolidada al 3 por 100, para convertirlos en inscripciones intransferibles á favor de los referidos establecimientos, los cuales cubririan sus obligaciones con los intereses de aquellas, y desde luego se les aseguró la renta líquida, que producian sus fincas. Mas, por la ley de 11 de Julio de 1856 se introdujo una variacion notable en los de instruccion pública: se declaró que debian considerarse como del Estado para todos los efectos de su venta los bienes de la instruccion pública superior, entendiéndose por tales, se-

(1) Sentencias de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 1.º de Abril y 24 de Mayo de 1869. La primera recayó en el pleito promovido por la Santa hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, y en sus considerandos 1.º y último dice lo siguiente:

«Considerando que aunque los bienes de los establecimientos particulares de beneficencia, á pesar de su índole diversa, se hallan comprendidos en la disposicion general de la ley de 1.º de Mayo de 1855 como pertenecientes á manos muertas, contra esta presuncion de la ley cabe segun derecho la prueba de la escepcion de cualesquiera bienes que, por ser libres ó de libre contratacion, no sean de los realmente amortizados, ni deban ser por lo mismo de los declarados en venta, segun así lo tiene consignado la jurisprudencia en repetidos Reales decretos-sentencias:....

Y considerando que si se hiciera la conversion en inscripciones intrasferibles de los bienes de este establecimiento, quedaria la Hermandad privada de la facultad de enajenarlos en beneficio de los pobres á quienes pertenecen, y aun para su propio aumento ó mejora, lo cual, no solo seria contrario al objeto y fin de tan piadoso instituto, sino tambien á la voluntad de los donantes.»

gun el art. 8.°, §. 5.° de la instruccion de la propia fecha, aquellos cuyos productos en renta figuraban en los presupuestos generales de ingresos del Estado; y que solo los que no se hallaban en este caso, eran los que debian considerarse como del respectivo establecimiento para los efectos antes indicados.

Debiendo limitarnos en este artículo á lo que se relacione con el contrato de compraventa, como ya se ha dicho, reservamos para su lugar correspondiente la esposicion de la ley de 1.° de Abril de 1859, y demás disposiciones dictadas para la emision y entrega de las inscripciones intransferibles á las corporaciones civiles, y pago de sus intereses. Véase **CORPORACIONES CIVILES: HOSPITALES, ETC.**

§. 5.° *Bienes del patrimonio de la Corona.*

Reservando para su artículo todo lo que se refiere concretamente al *Patrimonio de la Corona*, debemos esponer en este lugar lo que se halla dispuesto respecto á la venta de los bienes del mismo.

Por la ley de 12 de Mayo de 1865 se designaron los bienes que habian de formar en lo sucesivo dicho patrimonio; se adoptaron disposiciones para su conservacion, y se declararon en estado de venta los demás bienes rústicos y urbanos, y los censos que hasta entonces se habian considerado como del Real patrimonio, aplicando al Estado el 75 por 100 del precio de estas ventas, y á la Real Casa el 25 por 100 restante. Entendia en estas enajenaciones la administracion general de la propia Real Casa, á cuyo cargo continuaron los bienes, con una Junta especial creada por dicha ley, y para llevarlas á efecto se dictó un reglamento, determinando circunstanciadamente todas las condiciones y formalidades de las ventas, cuyo reglamento puede verse en la sec. 7.ª de la *parte legislativa*.

Ocurrida la revolucion de Setiembre de 1868, uno de los primeros actos de la Junta provisional revolucionaria de Madrid fué la incautacion de todo lo perteneciente á la Real Casa, y en 3 de Octubre siguiente nombró una comision que cuidara «de la conservacion y custodia de todos los bienes que formaban el llamado patrimonio de la Corona.» En 14 del mismo mes el Gobierno provisional creó y nombró con el propio objeto un consejo, compuesto de 10 individuos, bajo la presidencia del Ministro de Hacienda; y por otro decreto del mismo Gobierno de 18 de Diciembre siguiente se declaró terminado el encargo conferido á dicho consejo, y se creó una Direccion general, titulada «del patrimonio que fué de la Corona,» incorporada para todos sus efectos al espresado Ministerio, y además una junta, compuesta de once individuos, para la consulta de todos los asuntos de gravedad ó de carácter contencioso.

Bajo la dependencia de este centro directivo, y conforme á las disposiciones anteriores, continuó la enajenacion de los bienes de que se trata, hasta que por último, para regularizar este servicio público, se promulgó la ley de las Córtes constituyentes de 18 de Diciembre de 1869. El art. 1.° de esta ley dice así: «Se declara estinguido el Patrimonio de la Corona, fundado por la ley de 12 de Mayo de 1865. Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominacion y la de Real Casa revierten en pleno dominio al Estado.» Por el 2.° y 3.° se manda proceder á la enajenacion de todos los bienes que bajo el espresado concepto se incorporaban al Estado, así como de los detentados que éste reivindique en adelante, debiendo verificarse la de los raices por el Ministerio de Hacienda, segun lo dispuesto en la legislacion vigente sobre propiedades y derechos del Estado. Y se ordena asimismo por el art. 7.° y siguientes, proceder con arreglo á la propia legislacion general á la redencion y venta de todos los censos, inclusos los arrendamientos anteriores al año 1800, y de los bienes de los patronatos de la Corona, sin perjuicio de sus cargas, para cuyo cumplimiento se entregarán inscripciones intransferibles del 3 por 100 interior.

Por el citado art. 2.° de dicha ley se esceptúan de la enajenacion los bienes que se destinan al uso y servicio del Rey, consistentes en los palacios y sitios de recreo, que se espresan en el art. 14 de la propia ley; los que

por su carácter histórico y artístico deban conservarse; los que convenga destinar para servicio del Estado, y aquellos que con arreglo á la ley de 9 de Junio del mismo año 1869 se cedan para las servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos enclavados en los territorios que fueron de la Corona.

§. 6.° *Division y clasificacion de los bienes nacionales para los efectos de las ventas.*

La ley de 1.° de Mayo de 1855 se limitó á hacer la descripcion ó reseña de los bienes declarados en estado de venta, en los términos espuestos en los párrafos anteriores, estableciendo unas mismas condiciones para la enajenacion de todos ellos. Pero la de 11 de Julio de 1856 los dividió en dos grupos, estableciendo condiciones diferentes respecto á su administracion y á la forma de pagar el precio de la venta, y clasificó detalladamente los que habian de comprenderse en cada uno de dichos dos grupos. Importa conocer esta division y clasificacion, acerca de las cuales está encargada la mayor exactitud (1), por la razon indicada de estar sujetos á diferentes condiciones de pago los bienes comprendidos en cada agrupacion.

Además, en ambas leyes se hizo otra clasificacion de los bienes, cualquiera que sea su procedencia, tomando por base la importancia de los mismos, con el objeto de dar mas ó menos amplitud á la subasta, y aun tambien á los plazos para el pago: esta clasificacion consiste en bienes de menor y de mayor cuantía.

Tenemos, pues, dos clasificaciones de los bienes de que se trata: la una por razon de su orígen ó procedencia, y para los efectos de la venta en cuanto á la forma y plazos de pagar el precio; y la otra, en consideracion á su importancia, para el efecto de dar mas ó menos amplitud á la subasta y tambien á los plazos para el pago. Segun la primera se dividen los bienes en dos clases: 1.° *Bienes del Estado*; y 2.° *Bienes de corporaciones civiles.* Y conforme á la segunda, unos y otros bienes se dividen tambien en dos clases: *de menor* y *de mayor cuantía*. Veamos ahora los bienes que corresponden á cada una de estas clases, reservando para la seccion oportuna el esponer los efectos de estas divisiones.

Bienes del Estado. Se consideran como tales para dichos efectos los siguientes:

1.° Los que llevan este nombre: esto es, los prédios rústicos y urbanos, censos y foros que son de la propiedad particular del Estado, y cuya descripcion se hizo en el párrafo 1.° de esta seccion. Corresponden á esta clase los bienes, cuya administracion estaba en 1.° de Mayo de 1855 á cargo de los administradores de provincia; los destinados al servicio de las oficinas y establecimientos del Estado, y los de la misma procedencia que despues se hayan descubierto, ó que en lo sucesivo se descubran, y no hubiesen sido adjudicados al clero (1).

2.° Los del clero. Deben reputarse como tales los bienes que primitivamente pertenecieron al clero, y devolvió al Estado en virtud de la ley de 1.° de Mayo de 1855; los de la misma procedencia que despues se hayan descubierto y descubran en lo sucesivo, y los de otras procedencias que tambien se le adjudicaron con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 8 de Diciembre de 1851 (2), ó sean los relatados en el párrafo 4.° del art. 35 y en el 6.° del 38 del concordato, como se espuso en el párrafo 2.° de esta seccion.

3.° El 20 por 100 de propios: esto es, la parte que corresponde al Estado en las ventas que se hagan de los bienes de las corporaciones municipales, afectos á satisfacer tambien al Estado el 20 por 100 de sus productos en renta (3).

4.° Los de instruccion pública superior, cuyos productos ingresen en las cajas del Tesoro, por hallarse comprendidos en los presupuestos generales de ingresos del Estado (4).

(1) Artículos 7.° y 9.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856.

(1) Art. 8.°, núm. 2.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 8.°, núm. 3.° de id.
(3) Art. 8.°, núm. 4.° de id.
(4) Art. 8.°, núm. 5.° de id.

5.° Los de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalen. Se entienden por tales los bienes, cuyas rentas disfrutaban en 1.° de Mayo de 1855, y siguieron disfrutando los actuales comendadores de dichas órdenes, y los de la propia procedencia que se hayan descubierto ó descubran en lo sucesivo. Pero los del mismo orígen, que pertenecian al Estado en aquella fecha, ó que fueron adjudicados al clero en cumplimiento del concordato de 1851, deben continuar con la aplicacion que ya tenian para los efectos de que se trata (1).

6.° Los del secuestro del ex-infante Don Cárlos.

7.° Los de las cofradías, obras pías, santuarios y demás manos muertas, no comprendidas en las corporaciones civiles. Deben reputarse como bienes de cofradías, obras pías y santuarios los de esta clase que ya poseia el Estado en 1.° de Mayo de 1855; pero no aquellos de la misma procedencia que se imputaron al clero anteriormente, los cuales deben continuar considerándose como pertenecientes al mismo, así como los demás bienes de que estaba incautado (2).

8.° Los destinados á la cóngrua sustentacion de beneficiados y demás eclesiásticos, escepto las capellanías colativas de sangre y patronatos de igual naturaleza (3).

Todos los bienes que quedan relatados se consideran como de la propiedad del Estado para los efectos de la venta y para la recaudacion de sus rendimientos. Sin embargo, no se hallan en este caso los bienes del clero y demás procedentes de manos muertas eclesiásticas, mientras no se verifique la cesion canónica de los mismos, como se dijo en el párrafo 2.° de esta misma seccion. Y en cuanto al 20 por 100 de propios, los ayuntamientos á quienes pertenezca el resto de la finca, siguen administrando dicho 20 por 100 hasta que se verifica su enajenacion, la cual ha de realizarse en union con el 80 correspondiente á los pueblos, corriendo unidas todas las operaciones hasta este acto, si bien los pagarés á plazo han de espedirse con la debida separacion de la parte correspondiente á cada interesado (1).

Bienes de corporaciones civiles. Se reputan como tales para los propios efectos de la venta:

1.° El 80 por 100 de los bienes de propios. El 20 restante pertenece al Estado, como ya se ha dicho.

2.° Los de beneficencia, inclusos los de patronatos particulares, segun se ha espuesto en el párrafo 4.° de esta seccion.

3.° Los de instruccion pública, cuyos productos no ingresen en las cajas del Estado.

4.° Los demás bienes que bajo diferentes denominaciones corresponden á las provincias y á los pueblos (2).

Todos estos bienes pertenecen realmente á corporaciones civiles, las cuales conservan su propiedad y tambien su administracion hasta el acto de la venta (3), de suerte que no llega á incautarse de ellos el Estado. Se diferencian asimismo de los que á este corresponden en la forma y plazos del pago, como se espondrá mas adelante.

Los *bienes del patrimonio de la Corona* y de la Real Casa pertenecen hoy en pleno dominio al Estado, en virtud de la ley de las Córtes constituyentes de 18 de Diciembre de 1869. Debian, por tanto, ser comprendidos para los efectos de las ventas entre los de la primera clase, y así pudiera deducirse del artículo 3.° de dicha ley, segun el cual han de enajenarse estos bienes por el Ministerio de Hacienda con arreglo á lo dispuesto en la legislacion vigente sobre propiedades y derechos del Estado. Sin embargo, el art. 4.° dispone terminantemente, que los compradores de inmuebles y censos pagarán el precio en el número de años y plazos establecidos y segun el método prescrito para la enajenacion

(1) Art. 8.°, núm. 6.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 8.°, núm. 7.° de id.
(3) Arts. 3.° y 9.° de la ley de 11 de Julio de 1856.

(1) Art. 11 de id. y 8.°, núm. 1.° de la instruccion de la misma fecha.
(2) Art. 10 de la ley de 11 de Julio de 1856.
(3) Art. 12 de id.

de los bienes de *corporaciones civiles*. De suerte que, aunque tales bienes han sido adjudicados al Estado, para los efectos de la venta se consideran como de corporaciones civiles, y así suele espresarse en los anuncios, lo cual no puede tener otro objeto que el de que se paguen precisamente en metálico y en diez plazos.

Bienes de menor y de mayor cuantía. Se consideran como de *menor cuantía*, para los efectos de la subasta y venta, las fincas cuya tasacion ó capitalizacion no esceda de 2,000 escudos, ya pertenezcan al Estado ó á corporaciones civiles; y de *mayor cuantía* todas las que hayan sido tasadas ó capitalizadas en mas de 2,000 escudos (1). Para este efecto ha de servir de tipo el valor que resulte mas alto, bien sea el de tasacion, bien el de capitalizacion. Cuando una finca se subdivida en dos ó mas suertes, que hayan de venderse por separado, se atenderá el valor de cada suerte para clasificarlas de mayor ó de menor cuantía, y no al de toda la finca en conjunto.

SECCION II.

DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN ESTAS VENTAS Á NOMBRE DEL ESTADO: ATRIBUCIONES RESPECTIVAS DE LOS MISMOS, Y RECURSOS CONTRA SUS PROVIDENCIAS.

El Estado es el vendedor de los bienes nacionales. Siendo, como es una entidad moral, tiene necesariamente que estar representado por funcionarios públicos á quienes la ley ó el Gobierno supremo confiera ó delegue esa facultad; lo propio que sucede en todos los actos en que aquel tiene interés, ó debe intervenir como persona jurídica. La intervencion de estos funcionarios tiene por objeto, no solo la representacion del Estado como parte contratante; sino tambien la proteccion y defensa de los intereses públicos encomendados á la tutela del Gobierno. La investigacion é incautacion de los bienes, promover su enajenacion, la descripcion, medida y justiprecio de los mismos, la publicidad de las subastas, el acto del remate, su aprobacion, el pago del precio y todo lo demás hasta la consumacion de la venta, son otras tantas operaciones que conducen al fin indicado, y que exigen la intervencion de varias personas. De aquí la necesidad de determinar las atribuciones de cada una de ellas. Y como por ignorancia, descuido ó malicia pudieran causar perjuicios, bien al Estado ó á los particulares, justo era tambien establecer los recursos oportunos para la revision de sus acuerdos ó providencias.

A todo ello se atendió en la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y disposiciones posteriores. El jefe supremo del ramo es el Ministro de Hacienda, el cual resuelve en último término por la vía gubernativa todas las cuestiones é incidencias sobre ventas, si bien contra sus resoluciones puede entablarse la vía contencioso-administrativa, cuando lastiman derechos adquiridos. Además se creó una *Direccion general de ventas de bienes nacionales*, denominada despues *de propiedades y derechos del Estado*, la cual ejerce, bajo las inmediatas órdenes del Ministro, la autoridad superior gubernativa en todos los negocios de administracion, investigacion y venta de dichos bienes. Tambien se crearon una *Junta superior de ventas, juntas provinciales, comisionados principales y subalternos, é investigadores*. Y se dieron atribuciones ó intervencion á los gobernadores de provincia, contadores de Hacienda pública, que poco despues fueron reemplazados por los administradores de bienes nacionales, jueces de primera instancia, escribanos y peritos tasadores.

Vamos á esponer sucintamente las atribuciones de cada uno de ellos, y su intervencion en la instruccion de los espedientes de subasta y en todo lo demás relativo á las ventas, reservando para sus artículos correspondientes lo que se refiere á la investigacion y demás que no se relacione directamente con aquellas. A la vez indicaremos los fun-

(1) Art. 6.° de la ley de 11 de Julio de 1856, que modificó en este punto los arts. 4.° y 5.° de la de 1.° de Mayo de 1855, segun los cuáles eran consideradas como de menor cuantía las fincas ó suertes cuyo valor en tasacion no escedia de 10,000 reales, y de mayor cuantía las que escedian de esta cantidad.

cionarios que han sustituido á los gobernadores y contadores de provincia.

Director general. Aunque es la autoridad superior gubernativa del ramo, como ya se ha indicado, no puede ejercerla por sí solo en los asuntos concernientes á la enajenacion y sus incidencias. La resolucion de estos asuntos es de la competencia de la Junta superior de ventas que preside dicho Director, el cual comunica á quien corresponde las resoluciones de la misma, y cuida de que sean ejecutadas. Pueden verse sus demás atribuciones en la instruccion citada de 31 de Mayo de 1855.

Junta superior de ventas. Al crearse por Real decreto de 15 del mes antes citado la Direccion general de ventas de bienes nacionales, se dispuso tambien la creacion de una Junta, que resolviera los asuntos concernientes á las ventas y sus incidencias. Se llevó á efecto la creacion de esta Junta por el art. 93 de dicha instruccion, disponiendo se denominara *superior de ventas*, y se compusiera del Director, presidente, de dos senadores, dos diputados, dos altos funcionarios pasivos, dos personas notables por su ciencia, arraigo y probidad, del Asesor general de Hacienda y de un secretario (1). En ausencias y en enfermedades del Director preside el vocal de mas edad. Esta Junta toma sus acuerdos por mayoría de votos: en caso de empate se convoca á una nueva sesion procurando que sea impar el número, y si continúa el empate, se da cuenta al Ministerio para su resolucion (1).

En el art. 96 de la propia instruccion se determinaron las atribuciones resolutivas y consultivas de esta Junta. Resuelve los espedientes que se promuevan sobre escepciones de la venta; reclamacion de cargas; division de fincas; nulidad y suspension de subastas; adjudicacion al mejor postor de la finca ó fincas rematadas; aprobacion de los sorteos que deben celebrarse cuando en las dobles ó triples subastas resultan dos posturas iguales; y todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas y censos ó sus redenciones. Y consulta al Gobierno, dando su dictámen, cuantas dudas le ocurran en la aplicacion de las leyes y disposiciones sobre desamortizacion y venta de los bienes nacionales, y las resoluciones que estén fuera de sus atribuciones.

Contra los acuerdos de dicha Junta se dá el recurso de alzada para ante el Ministro de Hacienda (2). No estaba determinado el plazo para entablar estos recursos, con el grave inconveniente de quedar en incierto por tiempo ilimitado los derechos de los particulares y del Estado, y á fin de evitar los perjuicios que de aquí se seguian, se fijó el de 60 dias por Real órden de 20 de Agosto de 1866, mandando, que todos los acuerdos que dicte la Junta superior de ventas, y lo propio la Direccion del ramo, dentro del círculo de sus

(1) Por decreto del Regente de 15 de Agosto de 1870, publicado cuando ya se estaba imprimiendo este artículo, se ha reformado la organizacion de la Junta superior de ventas, aunque sin alterar sus atribuciones. Segun dicho decreto, esta Junta conservará en lo sucesivo la organizacion establecida en el art. 93 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855; pero duplicándose el número de sus vocales de la clase de diputados, senadores, altos funcionarios pasivos, y personas notables por su ciencia, arraigo y probidad. En lugar del Asesor general de Hacienda, cuyo cargo se halla suprimido, formará parte de la Junta como vocal nato el fiscal de la Deuda pública. Hasta tanto que se constituya el Senado, serán sustituidos por cuatro diputados á Córtes los cuatro senadores que deben pertenecer á ella. Serán tambien vocales natos de la misma los Directores generales de obras públicas, agricultura, industria y comercio, y del patrimonio que fué de la Corona; el jefe de la seccion de beneficencia en el Ministerio de la Gobernacion, y el de la seccion de culto y clero en el de Gracia y Justicia. Y continuará desempeñando el cargo de secretario el tercer jefe de la Direccion general de propiedades y derechos del Estado. A la vez se declaró disuelta la Junta anterior, y se hizo el nombramiento de los vocales que han de componerla, segun esta nueva organizacion.

(1) Real órden de 8 de Octubre de 1862.

(2) De los acuerdos de la Junta superior de ventas de bienes nacionales no se apela á los gobernadores civiles ni á los consejos provinciales; sino al Gobierno de S. M., y contra las resoluciones del Gobierno solo cabe el recurso contencioso ante el Consejo de Estado en primera y única instancia. (*Sentencias del Consejo de Estado de 22 de Noviembre y 21 de Diciembre de 1860.*)

Queda firme é irrevocable la resolucion del Gobierno en los casos de que se trata, si no se reclama contra la Real órden por la vía contenciosa dentro del término de seis meses que prescribe el Real decreto de 21 de Mayo de 1853. (*Id. de id. de 7 de Febrero de 1862.*)

atribuciones, causen estado en la vía administrativa, si no se reclaman dentro de 60 dias, contados desde el siguiente al en que administrativamente se notificó el acuerdo á los interesados (1). Véase en la seccion 1.ª de la *parte legislativa* la circular de la Direccion de 15 de Setiembre del propio año 1866, en la que se esplican los motivos y efectos de dicha Real órden, y se dan reglas sobre la forma en que ha de hacerse la notificacion administrativa y modo de acreditarla.

Juntas provinciales. Por el art. 98 de la propia instruccion de 31 de Mayo de 1855 se creó una junta de ventas en cada provincia, compuesta del gobernador, presidente, de un diputado provincial, del contador de Hacienda pública, hoy el jefe de la seccion de propiedades y derechos del Estado, como luego se dirá, de un mayor contribuyente, un concejal nombrado por el ayuntamiento, y del comisionado de ventas, que hace de secretario, y por su ausencia ú ocupacion, persona que lo represente. Las atribuciones de estas juntas están limitadas á instruir los espedientes sobre escepciones de la venta, division de fincas, reclamaciones é incidencias de ventas y demás que se determinan en los arts. 99, 100 y 101 de dicha instruccion, cuyos espedientes deben remitir con su dictámen por medio del gobernador á la Junta superior para su resolucion ó consulta al Gobierno. Carecen por tanto de facultades resolutivas.

Gobernadores de provincia: hoy los *Jefes de las administraciones económicas.* El artículo 103 de la citada instruccion reseña las atribuciones de los gobernadores en lo relativo á las ventas de que se trata. Les corresponde, entre otras, que pueden verse en dicho artículo, disponer la tasacion y capitalizacion de las fincas cuya venta se haya solicitado por los que deseen adquirirlas, ó crea útil aunque no se pida: nombrar los peritos para la tasacion y division de las fincas, á propuesta de los comisionados de ventas: señalar dia y hora para la subasta (2): acordar la suspension de la misma, si hubiere reclamacion sobre division ó de cualquiera otra clase, en cuyo caso ordenará la formacion del oportuno espediente, que, con el dictámen de la junta provincial, elevará dentro de 15 dias á la superior para su resolucion: aprobar los actos de los espedientes de subasta, remitiendo por el primer correo los testimonios de ella á la Junta superior para que haga la adjudicacion al mejor postor: comunicar al juez del remate las órdenes de adjudicacion para su cumplimiento: cuidar de que los compradores paguen los plazos en el término señalado, declarándolos en quiebra, si no lo verifican (1); y comunicar y hacer cumplir las órdenes que se espidan por la superioridad. Contra sus acuerdos puede acudirse á la Direccion del ramo.

El art. 84 del reglamento de la administracion económico-provincial, aprobado por de reto de 8 de Diciembre de 1869, determina los deberes y atribuciones de los *Jefes de las administraciones económicas*, y en el número 41 se contienen las siguientes: «Ejercer todas las atribuciones y cumplir todos los deberes que impusieron á los gobernadores de las provincias la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y demás disposiciones vigentes, salva la facultad que corresponde á los gobernadores de presidir las juntas provinciales de ventas, si estiman concurrir á ellas en uso de la autoridad superior y vigilancia que ejercen.»

Contadores de Hacienda pública: hoy los *Jefes de las secciones de propiedades y derechos del Estado.* En el propio art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo antes citado, se enumeran tambien las atribuciones de dichos contadores y su intervencion en los espedientes de ventas. Les corresponde; formar los registros de fincas y censos, y tenerlos á disposicion de cuantos quieran enterarse de ellos: suministrar á los peritos tasadores, en union

(1) Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Abril de 1869.

(2) Sobre esta atribucion y la que sigue, véase en la sec. 1.ª de la *parte legislativa* la Real órden de 8 de Junio de 1859 y el Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

(1) Sobre este punto véanse en la sec. 1.ª de la *parte legislativa* las disposiciones 9.ª y 10 de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

con el comisionado de ventas, cuantos datos y noticias puedan contribuir al mejor desempeño de su encargo: practicar las capitalizaciones de las fincas y censos: hacer en el preciso término de tres dias (1) la liquidacion de cargas de las fincas: tomar razon de las enajenaciones y del nombre del comprador: intervenir las cartas de pago que se espidan á los compradores y las obligaciones que estos presten: hacer la liquidacion de la responsabilidad civil que afecte á los compradores declarados en quiebra, y proceder á exigirla por la vía de apremio (2): evacuar los informes que se les pidan respecto á las fincas, censos y demás pertenecientes á la nacion, y custodiar los espedientes de ventas, inventarios, títulos de propiedad y demás papeles. Carecen, por tanto, de atribuciones resolutivas.

Por el art. 10, núm. 6.° de la instruccion de 16 de Abril de 1856 se cometieron estas atribuciones á los administradores de bienes nacionales; pero en el art. 88 del reglamento, ya citado, de la administracion económico-provincial, se fijan los deberes y atribuciones de los *jefes de las secciones de propiedades y derechos del Estado*, y entre ellas se hallan (números 5.° y 6.°) las de ocupar en las juntas provinciales de ventas de bienes nacionales el puesto señalado á los contadores de Hacienda pública por el art. 98 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y desempeñar las funciones encomendadas á los mismos contadores por el 103 de la propia instruccion. Se les encargan además otras funciones en este ramo, que pueden verse en los artículos del citado reglamento, insertos en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*.

Comisionados de ventas. Siendo estos funcionarios los encargados principales de promover la venta de los bienes nacionales, lógico era que se les concedieran las atribuciones para ello necesarias, y así se hizo por el propio art. 103, ya citado, de la instruccion de 31 de Mayo. Segun él, les corresponde: llevar los registros de fincas; proponer á los gobernadores, hoy á los jefes económicos, los peritos que en nombre del Estado hayan de tasar y dividir las fincas; oficiar á los alcaldes para que el síndico nombre otro perito que practique la operacion en union con el del Estado; activar la tasacion de las fincas que se hallen en estado de venta, procurando remover los obstáculos que á ello se opongan; suministrar á los peritos los datos necesarios para el buen desempeño de sus cargos; disponer la publicacion de los anuncios de subasta, y remitir á la Junta superior las relaciones de la doble ó triple subasta para su insercion en el *Boletin oficial de ventas*; remitir á los jueces, que han de entender en las subastas, el *Boletin oficial* en que se publiquen las fincas para que dispongan la instruccion del espediente y celebracion del remate; asistir á las subastas y remitir á la Direccion en el mismo dia una nota de las fincas rematadas con el V.° B.° del juez; remitir al gobernador en el mismo dia que los reciban, ó á mas tardar en el siguiente (1), los espedientes con los testimonios del remate para su aprobacion; procurar que, aprobadas las subastas, se envien por el primer correo los testimonios á la Junta superior; instruir los espedientes de remates de fincas y de toda clase de reclamaciones; conservarlos hasta que el comprador verifique el pago del primer plazo, en cuyo caso pasará el espediente á la contaduría para que lo archive; y por último, dar cuenta al gobernador, hoy ó al jefe económico, cuando una finca haya sido rematada por una cantidad igual en ambas subastas, para que disponga se celebre el sorteo prevenido.

Estas son en resúmen las atribuciones de los comisionados principales de ventas, que pueden verse con mas estension en el artículo citado, inserto en la *parte legislativa*. Tambien les correspondia oficiar al alcalde del pueblo donde radique la finca para que se fije en los sitios de costumbre el edicto anunciando la subasta; mas por Real órden de 18 de Diciembre de 1858 se mandó que esto se ve-

(1) Dispos. 5.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867.
(2) Dispos. 11 y 12 de id.

(1) Dispos. 3.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

rifique por el juez de la capital que deba entender en la subasta, á cuyo fin el comisionado le pasará el competente número de ejemplares del *Boletin* en que se haya publicado el anuncio.

Asimismo deben cuidar los comisionados de que los espedientes que pasen á la contaduría, hoy á la seccion del ramo en la administracion económica para su archivo, consten de la peticion de la finca ó mandato de venta; del informe de las oficinas; de la certificacion de los peritos tasadores; del *Boletin oficial* en que se haya publicado la subasta; de la fecha de la órden de adjudicacion; del nombre á cuyo favor se hizo, y de la cantidad y fecha del primer plazo.

Ultimamente, por la disposicion 6.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867, se encargó á los comisionados que en el término de ocho dias improrogables hagan notificar administrativamente al rematante la adjudicacion de la finca, cuya notificacion ha de hacerse en la forma que previene la disposicion 7.ª de la propia Real órden, que puede verse en la *parte legislativa*; y, segun la 8.ª, deben unir al espediente la cédula de notificacion, ó el *Boletin* y *Diario*, cuando se hubiere hecho por edictos; hacer que la administracion ponga nota de si resulta pagado el primer plazo, luego que trascurran los 15 dias marcados para ello; y caso negativo dar cuenta al punto al gobernador, hoy al jefe económico de la provincia.

Jueces de primera instancia. La intervencion de la autoridad judicial en ciertos actos de la vida civil es considerada como una garantía de las partes, para asegurar sus derechos y evitar lesiones futuras; y se ha estimado además, y estima como necesaria, siempre que los actos interesan á menores, ó á personas y corporaciones que gozan de sus privilegios, á fin de dar mayor autenticidad y firmeza al acto, suplir la falta de personalidad y dispensar la debida proteccion á los que no pueden contratar por sí mismos. Partiendo de estos principios, se ha dado intervencion á los jueces de primera instancia en los espedientes de ventas de bienes nacionales, limitada, como debia ser, á lo que es propio y peculiar de la jurisdiccion voluntaria; pero en actos tan importantes, como son los que se refieren á la solemnidad y esencia del contrato. El juez es quien realmente otorga la venta á nombre del Estado: la Administracion no hace mas que preparar el espediente reuniendo los datos necesarios para realizarla, y cuidar del cumplimiento del contrato despues de realizado.

En el propio art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, inserto en la *parte legislativa*, y en las demás disposiciones que en él se citan, están determinadas circunstanciadamente las atribuciones de los jueces de primera instancia en las ventas de que se trata. Como pueden verse en el lugar citado, y se han de esponer además en el correspondiente de la seccion 3.ª al tratar de las subastas y sus consecuencias, nos limitaremos á hacer aquí una ligera reseña de ellas.

Corresponde á los jueces de primera instancia concurrir á la celebracion de la subasta con el comisionado de ventas y escribano en el dia y hora fijados en el anuncio: poner el V.º B.º en la nota de las fincas rematadas, que aquel debe remitir en el mismo dia á la Direccion: autorizar los remates, celebrándolos con citacion del síndico, uno para cada finca, y determinar la duracion del acto: concluir cada remate á favor del mejor postor: firmar el acta de la subasta con los concurrentes y el mejor postor, exigiendo á este que identifique su persona y domicilio: disponer, concluida la subasta, que el escribano libre el testimonio, que ha de entregarse al comisionado con el espediente dentro de 48 horas: admitir las cesiones de los remates que hagan los compradores dentro de los diez dias siguientes al pago del primer plazo: exigir á los rematantes, que no hayan hecho efectivo el primer plazo en el término correspondiente, la responsabilidad que les imponen los arts. 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 1856: disponer se dé posesion al comprador luego que presente la carta de pago, y otorgarle la correspondiente escritura de venta: concurrir con el escribano al sorteo que debe hacerse de las fincas rematadas por igual cantidad en las dobles subastas: estampar el vis-

to bueno en las notas que los escribanos deben dar á los compradores del importe del papel sellado que han de reintegrar al pagar el primer plazo; y cuidar de que el escribano cumpla su deber y se llenen todas las formalidades en las subastas.

En las poblaciones en que hay mas de un juez de primera instancia, se presta entre todos este servicio por turno. Tambien alternaba con ellos el juez especial de Hacienda donde lo habia; pero estos juzgados especiales se hallan hoy suprimidos por el decreto de 6 de Diciembre de 1868, estableciendo la unidad de fueros.

Escribanos. Interviniendo en las ventas los jueces de primera instancia con carácter judicial y en el ejercicio de su jurisdiccion voluntaria, deben hallarse asistidos de escribano que autorice el acto. Así lo dispone la instruccion antes citada, y en el mismo artículo 103 se determinan tambien las atribuciones de dichos funcionarios. Les corresponde; preparar los espedientes de subasta, sirviendo de cabeza el *Boletin oficial* que contenga el anuncio de la venta y el oficio de remision: citar para el acto al síndico del ayuntamiento: concurrir á los remates con el juez y comisionado, anotando sucesivamente las posturas y los nombres de los sugetos que las hagan, cuya nota han de unir al espediente: librar testimonio de la subasta, y entregarlo con el espediente al comisionado dentro de las 48 horas siguientes al acto de aquella: estender en su caso la cesion del remate: entregar al comprador testimonio de la adjudicacion y una nota, con el V.° B.° del juez, del papel sellado que deba reintegrar, para que verifique el reintegro: estender las escrituras, si son notarios á la vez, en los modelos impresos, dispuestos por la Junta superior de ventas, no omitiendo la prevencion de que se tome razon en la contaduría de Hacienda pública y en el registro de la propiedad; y por último, autorizar todos los actos y diligencias que emanen de providencias judiciales en los espedientes de subasta.

Segun el art. 102 de la citada instruccion de 31 de Mayo y las Reales órdenes de 8 de Julio y 4 de Octubre de 1855, los escribanos especiales de Hacienda debian turnar en este servicio con los de número de los juzgados de primera instancia. Esto no puede tener lugar en el dia respecto de aquellos, porque, suprimidos los juzgados especiales de Hacienda en virtud del decreto, hoy ley, de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificacion de fueros, han cesado los escribanos de los mismos. Tampoco pueden autorizar las escrituras de venta los escribanos de juzgado que no sean notarios, á los cuales corresponde esclusivamente esta facultad con arreglo á la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862, como se declaró por el Ministerio de Gracia y Justicia en Real órden de 23 de Setiembre de 1865. En tal caso se pasan los antecedentes á un notario de la misma poblacion para que autorice la escritura: este notario debe ser el designado por la Hacienda.

Peritos tasadores. Tambien los comprende entre sus disposiciones el art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, determinando las atribuciones que les corresponden, no obstante que no tienen el carácter de funcionarios públicos, como se declaró en Real órden de 30 de marzo de 1867, siguiendo la doctrina establecida por el Consejo de Estado en Real decreto de 5 de Marzo de 1864, por el que, fundándose en dicho motivo, se declaró innecesaria la autorizacion pedida por el juez de Hacienda de Toledo para procesar á los peritos que tasaron una finca de bienes nacionales. Sin embargo, quedan bajo la inmediata dependencia del comisionado de ventas en todo lo concerniente á las tasaciones que se les encarguen, como se previno en el artículo 7.° del decreto de 22 de Diciembre de 1868.

Segun dicho artículo 103, deben los peritos, luego que les sea entregada por el comisionado de ventas la órden para reconocer cualquier finca ó fincas, constituirse personalmente en el punto donde radiquen, y proceder á su reconocimiento, medicion, clasificacion, division en su caso, y tasacion en venta y renta; y verificadas estas operaciones, estenderán la correspondiente certificacion con el V.° B.° del alcalde del pueblo en que esté situada la finca, ó en su defecto del procura-

dor síndico. La forma en que han de verificar todas estas operaciones se espondrá mas adelante al tratar de ellas, indicando tambien los derechos que pueden percibir.

Ya se ha dicho que los peritos de la parte del Estado han de ser nombrados por los gobernadores, hoy por los jefes económicos, á propuesta de los comisionados de ventas. Debe haberlos en todos los partidos judiciales, designados de una vez para todas las tasaciones que ocurran. Aunque en la atribucion 3.ª de los gobernadores se dispuso que no fuese circunstancia precisa el que estén aprobados por la Academia, en Real órden de 20 de Mayo de 1856 se mandó que sean preferidos para este servicio los arquitectos y peritos agrónomos, y solo cuando no los haya ó no quieran admitir el encargo, podrá recaer el nombramiento en maestros de obras, alarifes y peritos de labranza. Se facultó á los gobernadores por la misma órden para que, cuando en un partido no haya arquitecto, ó agrimensor examinado, y sea necesario tasar alguna finca, cuya importancia requiera conocimientos científicos, dispongan que pasen á verificarlo uno de los otros partidos que reuna dichas circunstancias. Ultimamente, por el art. 4.º del decreto de 22 de Diciembre de 1868 se facultó tambien á los gobernadores para que, á falta de peritos, puedan encomendar la tasacion á funcionarios que disfruten sueldo del Estado ó de la provincia, los cuales tienen el deber de ejecutarla, percibiendo los derechos que les correspondan sin perjuicio del sueldo de su destino. Téngase presente que donde haya ingenieros agrónomos ó peritos agrícolas deben ser preferidos, segun el Real decreto de 1.º de Setiembre de 1855 creando la escuela central de Agricultura.

Queda hecha la sucinta relacion de las atribuciones que corresponden á cada uno de los funcionarios que deben intervenir en los espedientes de subasta y venta de bienes nacionales. En las secciones siguientes se espondrán con mas estension esas mismas atribuciones, espresando los casos y forma en que han de ejercerlas.

SECCION III.

DE LOS REQUISITOS Y SOLEMNIDADES PARA LA VENTA DE BIENES NACIONALES.

Para garantir los intereses del Estado y de las corporaciones que están bajo su tutela, evitando en lo posible los abusos y fraudes, á que tanto se presta esta clase de negocios, y para procurar la concurrencia de licitadores, y con ella las mayores ventajas en el precio, natural era que se reglamentaran y determinasen circunstanciadamente todas las operaciones que han de preceder y concurrir al acto de la venta. Así se hizo en la instruccion de 31 de Mayo de 1855, cuyas disposiciones sobre este punto han sido modificadas en muchos estremos por otras posteriores, segun lo aconsejaba la esperiencia en vista del resultado práctico de aquellas. De todas nos haremos cargo en esta seccion, esponiendo con la separacion conveniente cuanto se refiere á la designacion, tasacion y capitalizacion de las fincas, anuncios y condiciones de las subastas, y celebracion del remate.

Pero antes debemos indicar, que no puede procederse á estas operaciones sin que el gobernador de la provincia, hoy el jefe económico, lo haya acordado préviamente. Este acuerdo podrá dictarlo á instancia de parte, ó de oficio. Los particulares que deseen adquirir alguna finca de bienes nacionales, pueden acudir á dicha autoridad solicitando se anuncie la subasta: en tal caso, el gobernador pasará la solicitud al negociado correspondiente para que informe si la finca es de las declaradas en estado de venta, y siéndolo, debe disponer que se proceda á su tasacion y capitalizacion. Y lo propio puede acordar de oficio, aunque nadie lo solicite, cuando por indicaciones confidenciales, ó de otro modo, tenga motivo para creer útil la venta de una ó varias fincas (1). Por uno de estos dos

(1) Art. 103 de la instruc. de 31 de Mayo de 1855, atrib. 4.ª de las correspondientes á los gobernadores.

medios se dá principio al espediente de venta. Para facilitar dichas peticiones, las secciones de propiedades y derechos del Estado en las provincias están obligadas á tener siempre al corriente los registros de fincas y censos y á disposicion de cuantos quieran enterarse de ellos.

§. 1.° *Clasificacion, medida y tasacion de las fincas.*

Estas operaciones han de practicarse por dos peritos de la clase á que corresponda la finca: uno el del partido, nombrado por el jefe económico en la forma y con las condiciones que se han espuesto al final de la seccion anterior; y el otro designado por el procurador síndico del ayuntamiento donde radique la finca. Si esta procede de beneficencia ó de instruccion pública, el representante del establecimiento nombrará en el término de tercero dia, contado desde que reciba el aviso para ello, el perito que en union con el designado por el jefe económico debe proceder á dichas operaciones. En el caso de no ejecutarse el nombramiento en dicho plazo, lo verificará de oficio el juez de primera instancia. El nombramiento de perito tercero en el caso de discordia corresponde al gobernador, hoy al jefe económico (1).

La instruccion de estos espedientes está á cargo del comisionado principal de ventas, á quien corresponde por tanto pasar las comunicaciones ó avisos antes indicados para el nombramiento de peritos, que en union con el del partido hayan de practicar el reconocimiento y tasacion de las fincas. Tambien le corresponde comunicar la órden oportuna á los peritos de una y otra parte para que procedan á dichas operaciones. Todo esto lo ejecutarán los comisionados luego que se les pase el mandato del jefe económico para que se saque á la venta la finca, cuyo mandato, con la solicitud en su caso del que desee adquirirla y el informe de las oficinas, ha de servir de cabeza del espediente.

(1) Arts. 104 y 105 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

Luego que los peritos reciban dicha órden, deben constituirse personalmente en la misma finca, y proceder juntos á su reconocimiento. Han de principiar por clasificar y medir los terrenos, espresando su cabida conforme á la medida usual del país, y la que les corresponda segun el sistema métrico decimal, sirviendo de regulador la tabla oficial de correspondencia entre pesos y medidas. Si los peritos carecen de los conocimientos necesarios para hacer esta reduccion, deben practicarla las contadurías de provincia (1). Tambien deben examinar el estado de los edificios y plantíos, si los hubiere. En las fincas urbanas han de medir su área, y espresar todas las circunstancias del edificio y el estado de sus obras. Con todos estos datos, y teniendo además presente el producto ó la renta anual que pague la finca, si está arrendada ó alquilada, deduciendo los gastos, reparos, huecos, contingencias y administracion en las casas, procederán á verificar su tasacion en venta y renta, con inclusion del arbolado si lo hubiere, pues el producto de este debe formar tambien parte de la renta, fijando la una y la otra por su valor presente en dinero metálico, y sin deduccion de cargas, aunque las tenga: esta deduccion se hará mas adelante (2).

Practicadas las operaciones antedichas, deben los peritos estender una certificacion en la que espresen la situacion y linderos de la finca, clase ó clases del terreno segun su calidad, la cabida de la misma, si es ó no susceptible de division para los efectos que se espresarán en el párrafo siguiente, su valor en venta y renta, todo como se ha dicho anteriormente, y además si tiene edificios, fuentes, abrevaderos, sendas, veredas ó caminos que la atraviesen, ú otras servidumbres, como igualmente derecho á riego ó cualquiera otro en su beneficio, manifestando el estado de los edificios y plantío, si lo hubiere, y en su caso el número de cepas, olivos, frutales

(1) Reales órdenes de 3 de Enero y 21 de Febrero de 1856.

(2) Arts. 106, 107 y 110 de la instr. cit.: regla 7.ª de la Real órden de 10 de Marzo de 1868, y art. 4.° del Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

ú otros árboles de sombra ó fruto. Si los peritos están de acuerdo, firmarán ambos dicha certificacion; la presentarán al alcalde del lugar en que radique la finca, y en su defecto al procurador síndico, para que la autorice con su V.° B.°(1), y en el término de seis dias, que el jefe económico podrá ampliar hasta diez cuando la finca esceda de mil fanegas de cabida, la entregarán al comisionado de ventas. Si no están de acuerdo, cada uno estenderá su certificacion con las formalidades espuestas, y el comisionado lo pondrá en conocimiento del jefe económico para que nombre el perito tercero. Este evacuará su cometido en la propia forma que los discordantes, haciéndose cargo de los pareceres de éstos para dirimir la discordia (2).

Al pié de la certificacion deben los peritos fijar sus derechos, los cuales han de serles pagados por los compradores en el tiempo y forma que se dirá mas adelante en el párrafo 10 de esta seccion. Antes se les abonaba la mitad, que anticipaba el Estado, al entregar el certificado de tasacion, y la otra mitad cuando se enajenaba la finca; pero últimamente se ha mandado que los perciban directamente y de una sola vez de los compradores, y que solo en el caso de no enajenarse la finca por falta de licitadores, despues de haberse celebrado las subastas prevenidas, el Tesoro abonará á los peritos sus derechos con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto de gastos (3).

Los peritos son responsables civil y criminalmente de toda falta ú omision que contengan sus tasaciones. Para exigirles gubernativamente la responsabilidad por las operaciones que practiquen, no debe apreciarse la diferencia de un 3 por 100 de mas ó de menos en el número de fanegas medidas ó árboles contados; pero si escediere de este límite, ú omitiesen ó variasen la clasificacion del terreno, arbolado, edificios y demás condiciones de las fincas, la Direccion de propiedades y derechos del Estado debe corregirlos imponiéndoles una multa proporcionada á la importancia de la falta, que no baje de 10 escudos, ni esceda de 50, sin perjuicio del reintegro de la demasía de derechos cobrados. La reincidencia será penada con el máximum de la multa é inhabilitacion para las tasaciones de bienes nacionales. Esto en cuanto á las faltas que pueden corregirse gubernativamente y son de la competencia de la Administracion; pero si son de índole mas grave, como cuando se les justifique soborno, cohecho ú otros cargos de semejante naturaleza, entonces los peritos serán separados de su cometido y entregados á la accion de los tribunales (1). Para dirigir contra ellos estos procedimientos, no es necesaria la autorizacion prévia de la Administracion, como ya se ha dicho en la sec. II, al consignar las atribuciones de los peritos tasadores.

No solo por la responsabilidad que contraen, tanto civil como criminal; sino tambien para evitar fraudes y escusar las cuestiones á que dan lugar las operaciones de los peritos, deben estos emplear el mayor celo y diligencia en el desempeño de su cargo. La descripcion, medida y tasacion de la finca pueden conside-

(1) El alcalde no está obligado á responder de la exactitud de la operacion de medir y tasar las fincas de bienes nacionales, operacion que se confia esclusivamente á los peritos tasadores, viniendo á ser el V.° B.° del alcalde un medio de autorizar y legalizar la certificacion que aquellos estiendan, segun su leal saber y entender, y de consiguiente no puede ser responsable de la inexactitud que aparezca en dicha certificacion. (*Resolucion, á consulta del Consejo de Estado, de 16 de Octubre de* 1860, en el espediente sobre autorizacion para procesar al alcalde de la Palma.)

(2) Arts. 103 al fin, 105, 110 y 112 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y 6.° de la Real órden de 20 de Mayo de 1856.

(3) Arts. 190 y 191 de dicha instruc.; Reales órdenes de 20 de Mayo de 1856, 20 de Diciembre de 1858 y 21 de Setiembre de 1859, y decreto del Gobierno provisional de 22 de Diciembre de 1868. En los arts. 186 á 189 y 196 de la citada instr. de 31 de Mayo de 1855, se fijaron los derechos que debian percibir los peritos segun su clase, y la proporcion en que habian de dividirlos; pero estas disposiciones fueron modificadas, escepto la del art. 186, que contiene la tarifa de derechos para las fincas urbanas, por las dos Reales órdenes antes citadas de 1856 y 1859, estableciéndose á la vez otra tarifa para las fincas rústicas. Véanse todas estas disposiciones en la seccion 1.ª de la *parte legislativa* del presente artículo.

(1) Art. 177 de la inst. de 31 de Mayo de 1855; dispos. 5.ª de la Real órden de 21 de Setiembre de 1859, y art. 6.° del decreto de 22 de Diciembre de 1868.

rarse como la base de la subasta: si por negligencia ó por malicia se hacen con inexactitud estas operaciones, los actos sucesivos llevan en sí ese vicio radical; y dan por resultado, ó que el Estado quede perjudicado en sus intereses, ó que los compradores reclamen la rescision ó nulidad de la venta ó la indemnizacion de perjuicios. Apenas se suscita una cuestion de las llamadas incidencias de ventas, que no se funde en la inexactitud de la medida ó de cualquiera otra de las operaciones de los peritos, dando lugar en muchos casos al procesamiento de estos, y ocasionando siempre perjuicios al Estado y á los compradores. En la seccion IX se espondrá lo relativo á las incidencias que nacen de dichas inexactitudes.

En cuanto á los bienes procedentes del clero, por el art. 215 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, se mandó que no se practicara su tasacion, y que el tipo de la subasta fuera la capitalizacion. Despues, por Real órden de 10 de Setiembre del mismo año se dispuso que esto se entendiera en el caso de tenerse conocimiento exacto de la situacion, cabida y linderos, y de que estaba hecha la division conveniente, ó la finca no era susceptible de ella; y que á falta de cualquiera de estos datos, se procediera en los términos establecidos para la venta de los demás bienes. Por otra Real órden de 23 de Febrero de 1856 se derogó dicho art. 215, y se mandó que se tasaran todas las fincas del clero. Pero esta á su vez fué derogada por otra de 18 de Junio de 1863, que restableció la de 10 de Setiembre de 1855, dictando además nuevas reglas para la tasacion de dichos bienes (1).

Segun ella, solo deben tasarse las fincas del clero, cuyos linderos y cabida sean desconocidos. Tambien han de tasarse todas las urbanas, las rústicas cuya estension esceda de 20 hectáreas en terreno de regadío, y de 100 en secano, y aquellas cuyo arrendamiento sea anterior al año 1800. No se tasarán las fincas de que no conste si son susceptibles de division, en razon á que, debiendo sujetarse á tasacion precisamente las de mas de 20 y 100 hectáreas, segun su clase, en ella ha de resultar si son divisibles; y las que no lleguen á dicha medida es indiferente que lo sean ó no, por cuanto deben suponerse de menor cuantía, y estas no pueden subdividirse segun la Real órden de 22 de Julio de 1859. Salvas estas indicaciones, la tasacion ha de practicarse en la forma espuesta anteriormente para los demás bienes nacionales.

En la propia forma debe verificarse tambien la tasacion de los pequeños terrenos ó parcelas, que por sí solos no puedan formar solares de los ordinarios para edificar en ellos; pero teniendo muy especialmente en cuenta los peritos cuál sea su valor despues de agregados al terreno, con el que hayan de formar un solar ordinario edificable, cuya circunstancia espresarán en la certificacion, como tambien si la parcela, por su cabida, situacion y linderos, corresponde al propietario que reclame su adjudicacion (1). No así respecto de las fábricas de salitre, azufre y pólvora, que se rijen por disposiciones especiales, como se espondrá en la seccion XII.

Indicaremos, por último, que las fincas que estaban tasadas y no vendidas cuando se espidió el Real decreto de suspension de 14 de Octubre de 1836, para sacarlas de nuevo á la venta deben tasarse otra vez con las formalidades prevenidas, pues el trascurso del tiempo pudiera haber alterado sus condiciones, aumentando ó disminuyendo el valor. En tales casos, el comprador pagará los derechos de la última tasacion y el Estado los de la primera (2). Tambien deben tasarse de nuevo, como si saliesen por primera vez á la venta, las fincas declaradas en quiebra por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero: el gasto de estas tasaciones debe satisfacerse por los primitivos compradores (3).

(1) Véanse estas Reales órdenes en la seccion 2.ª de la *parte legislativa*.

(1) Arts. 1.° de la ley de 17 de Junio de 1864, y 4.° de la inst. de 20 de Marzo de 1865, que pueden verse en la seccion 6.ª de la *parte legislativa*.

(2) Real órden de 8 de Octubre de 1858, respecto de los bienes civiles, y la de 24 de Mayo de 1864 para los del clero.

(3) Arts. 7 y 12 del decreto de 23 de Junio de 1870.

§. 2.° *Division de las fincas rústicas que lo permitan.*

Con fines políticos y económicos á la vez, en todas las leyes desamortizadoras se han consignado disposiciones para facilitar la adquisicion de los bienes desamortizados al mayor número posible de personas, hasta las de escaso caudal. Con este objeto el Real decreto de 19 de Febrero de 1836, confirmado por la ley de 28 de Julio de 1837, en las disposiciones 4.ª y 5.ª de su art. 3.° previno, que todos los prédios rústicos, susceptibles de division sin menoscabo de su valor, ó sin graves dificultades para su pronta venta, se distribuyesen en el mayor número de partes ó suertes que ser pudiera, y que estas suertes se pusieran en venta con total separacion, como si cada una hubiese compuesto una propiedad aislada. La misma disposicion se reprodujo sustancialmente en el art. 3.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Para el cumplimiento de esta disposicion se ordenó en los arts. 108 y 109 de la instruccion del propio mes de Mayo, que al tiempo que los peritos hagan el reconocimiento y tasacion, verificarán la division de aquellas fincas susceptibles de ella, sin menoscabo de su valor, ni graves inconvenientes para su venta, declarando en caso contrario ser indivisibles. En el primer caso designarán tambien el valor, ó tasacion en venta y renta, que corresponda á cada una de las suertes en que hubiere sido dividida la finca, espresando, además de los árboles, edificios, servidumbres, etc., los lindes especiales de cada suerte, sin perjuicio de los generales de aquella, para que puedan anunciarse á la venta con todos estos datos (1). Todo esto han de consignarlo en la certificacion que deben librar, segun se ha dicho en el párrafo anterior.

Se consideran divididas para la venta todas aquellas fincas que lo estén por su naturaleza, ó se hallen en diferentes términos ó pagos, aunque su cultivo corra á cargo de uno ó más colonos, así como tambien las heredades ó fincas de grande estension que en el dia se cultiven en suertes ó pequeñas porciones; pero sin que el valor de ninguna de las suertes sea inferior al de 20,000 rs. Sin embargo, la Junta superior de ventas está autorizada para aprobar las divisiones de fincas, siempre que las considere beneficiosas á los intereses del Estado, aun cuando el valor de alguna de las suertes no llegue á dicha cantidad de 2,000 escudos (1).

Cuando se lleve á efecto la division de una finca, deben cuidar los peritos de que la parte de terrenos que contenga de inferior calidad, se aplique ó distribuya proporcionalmente entre todas las suertes contiguas (2).

No deben dividirse las fincas de menor cuantía, que son aquellas cuyo valor en tasacion ó capitalizacion no escede de 2,000 escudos: estas han de sacarse á la venta sin practicar en ellas subdivision alguna (3).

Los particulares que quieran interesarse en la subasta, pueden acudir al jefe económico solicitando que se divida en suertes cualquiera finca que se halle en condiciones para ello. Pero la esperiencia demostró que del uso ilimitado de esta facultad se originaban entorpecimientos para la enajenacion y gravámen para el Tesoro, el cual tenia que sufragar los gastos de la primera tasacion y publicacion de subasta, sin poder exigirlos despues á los compradores por haber sido inútiles estas operaciones. Para obviar tales inconvenientes se mandó por Real órden de 7 de Marzo de 1868, que una vez anunciada la subasta de una finca, no se admita reclamacion alguna dirigida á que se divida en suertes.

Tambien para evitar perjuicios al Estado, se estableció otra limitacion al principio de la division de fincas para la venta. Por la Real órden de 1.° de Febrero de 1856 se dispuso, que podrán acumularse para una sola

(1) Circular de la Direccion del ramo de 9 de Octubre de 1862.

(1) Reales órdenes de 1.° de Febrero de 1856, que modificó el art. 111 de la instr. de 31 de Mayo de 1855; de 22 de Julio de 1859, y 7 de Marzo de 1868.
(2) Real órden citada de 22 de Julio de 1859.
(3) La misma Real órden.

subasta diferentes prédios, siempre que sean de una misma procedencia, radiquen en un mismo término ó partido municipal, y su valor en tasacion ó capitalizacion no esceda de 20,000 reales. Mas, para llevar á efecto esta medida, es circunstancia precisa el que la diputacion y junta provincial de ventas estén conforme en la conveniencia de que así se verifique.

Corresponde á la Junta superior de ventas la resolucion de los espedientes sobre division ó acumulacion de fincas (1). Segun la práctica establecida, en vista del parecer de los peritos y de la solicitud en su caso de quien reclame la division, se oye al ayuntamiento del lugar donde radican las fincas, al administrador, comisionado y junta provincial de ventas, y además en los de acumulacion á la diputacion provincial, como se ha dicho, y con esta instruccion se remite el espediente por el gobernador, hoy por el jefe económico, á la Direccion general del ramo para la resolucion de la Junta superior.

§. 3.° *Capitalizacion.*

Segun el Real decreto de 19 de Febrero de 1836, las fincas de bienes nacionales se sacaban á pública subasta por el precio que resultase de la tasacion hecha por los peritos; pero en la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se dispuso, que además de la tasacion, se capitalizaran las fincas por su renta, y se sacaran á subasta por el precio mas alto. Se creyó así conveniente en consideracion sin duda á que la capitalizacion está sujeta á un tipo fijo y seguro, al paso que la tasacion depende de la apreciacion de los peritos, los cuales pueden equivocarse ó ceder á móviles de otro órden; y aunque el precio que estos designan debe estimarse como el mas conforme á las condiciones de la localidad, sirviendo el mas alto de tipo para la subasta quedan mas protegidos los intereses del Estado.

La capitalizacion de las fincas se verifica por su producto ó renta bajo la base de un 5 por 100 en los prédios urbanos, y de un 4 por 100 en los rústicos, deduciéndose antes el 10 por 100 por administracion. Así se dispuso en el art. 7.° de la ley de 11 de Julio de 1856, modificando el 114 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que habia fijado los tipos del 4 y 5 por 100 respectivamente. Cuando la renta se pague en especie, se reducirá á metálico, tomando por base el precio medio que haya tenido la misma en el último decenio, espresándose el que sea, y la especie y cantidad que se pague. Si no fuere conocida la renta de la finca, bien por pagarse aquella en union con otras, bien porque no haya estado arrendada, ha de girarse la capitalizacion por la renta dada por los peritos (1). Cuando las fincas participen de los dos caractéres de urbanas y rústicas, y por no poder subdividirse ó separarse, hayan de enajenarse unidas, servirá de tipo para la capitalizacion el que corresponda á la finca mayor, sea rústica ó urbana: así lo tiene acordado la Junta superior de ventas.

Corresponde practicar dicha capitalizacion á la seccion de propiedades y derechos del Estado de la administracion económica de la provincia, que ha reemplazado en estas funciones á las antiguas contadurías de Hacienda pública y administraciones principales del ramo. A este fin el comisionado de ventas, al dia siguiente de recibir la certificacion de tasacion de los peritos, debe pasarla con el espediente al jefe de dicha seccion. Este ha de formar la capitalizacion en el término de seis dias, manifestando á continuacion si la finca se halla ó no afecta á alguna carga ó censo, y caso afirmativo á favor de quién, clase de los censos ó cargas, capital y réditos, y cómo están impuestos, si se hallan pagados y corporacion que los perciba; y si está arrendada, por qué precio, y cuándo cumple el arriendo. Para evacuar este informe han de revisarse con toda escrupulosidad los títulos de propiedad de la finca, y si no existiesen, se exigirá del registrador de la propie-

(1) Art. 96, núm. 4.° de la instrc. de 31 de Mayo de 1855.

(1) Arts. 115 y 116 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, y 4.° del Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

dad del partido en que radique la finca la correspondiente certificacion, la cual debe espedirse en papel de oficio en el término de tercero dia, y con arreglo á lo que resulte de los libros del registro (1).

Para la capitalizacion de los censos rigen otras reglas, que se espondrán en la seccion X al tratar de la venta de censos.

Verificada la capitalizacion y depurados y consignados los estremos antedichos, como tambien en su caso el de que carecian de títulos de propiedad los antiguos poseedores, el jefe de la seccion de propiedades debe devolver sin dilacion el espediente al comisionado de ventas para los efectos que se espresan en el párrafo siguiente.

§. 4.° *Anuncios y término para las subastas: lugar donde han de celebrarse.*

Luego que el comisionado de ventas reciba el espediente con la capitalizacion de la finca, debe dar cuenta al gobernador, hoy al jefe económico, para que declare si es de mayor ó de menor cuantía, y señale el dia y hora en que haya de celebrarse la subasta (2). Es indispensable hacer préviamente dicha declaracion para determinar si ha de ser doble ó triple la subasta, y por consiguiente la forma y puntos en que hayan de publicarse los anuncios.

Si la finca ó suerte que se venda es de menor cuantía, esto es, si su valor en tasacion ó capitalizacion no escede de 2,000 escudos, como se dijo en el párrafo 6.° de la seccion 1.ª, su licitacion ha de tener lugar en dos subastas simultáneas, celebradas en un mismo dia y hora, la una en la cabeza del partido judicial donde la finca radique, y la otra en la capital de su respectiva provincia. Y cuando es de mayor cuantía, se celebran tres subastas, tambien simultáneas, en un mismo dia y hora; las dos antedichas en la cabeza del partido y de la provincia, y otra tercera en la capital de la Monarquía, ó sea en Madrid. Solo en el caso de estar situada la finca ó suerte en el partido de la capital de la provincia, se celebran una ó dos subastas respectivamente, por ser uno mismo el juez del partido y de la capital; y por la propia razon, si aquella está situada en Madrid, se celebra un solo remate, ya sea de menor ó de mayor cuantía (1).

El remate ha de celebrarse á los treinta dias de publicado el anuncio en el *Boletin oficial* de la provincia y en el de *ventas* de Madrid (2). De consiguiente, el jefe económico, para hacer el señalamiento del dia y hora en que haya de verificarse, debe calcular el tiempo necesario para ejecutar estas operaciones.

Respecto de las islas Canarias, por la dificultad de las comunicaciones, se amplió á 60 dias el plazo de 30 antes indicado, debiendo el gobernador, al designar el dia del remate, prevenir al comisionado de ventas remita á la Direccion general del ramo, por el primer correo, los correspondientes anuncios, á fin de que esta pueda disponer su insercion en el *Boletin oficial de ventas* de Madrid, de suerte que estén anunciadas las fincas los 30 dias á lo menos, que están prevenidos (3).

Solo en el caso de haber reclamacion sobre division de la finca, ó de cualquiera otra clase que exija una resolucion prévia, podrá suspenderse el señalamiento de dia y hora para la subasta. En tal caso, ordenará el jefe económico se forme el oportuno espediente para que, dando conocimiento á la junta provincial, y emitiendo esta su dictámen, se eleve á la resolucion de la Junta superior. En la instruccion de estos espedientes, hasta remitirlos á la superioridad, no han de invertirse mas de 15 dias (4). Una vez anunciada la subasta, ya no puede suspenderse sino por acuerdo de la Direccion ó Junta superior, á quien el jefe económico podrá esponer los motivos que lo aconsejen.

(1) Artículos 113, 117 á 120 inclusive de la instruccion citada de 31 de Mayo de 1855.
(2) Art. 121 de idem.

(1) Artículos 4.° y 5.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855; 128 y 129 de la instruccion de 31 del propio mes, y 6.° de la ley de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 122 de dicha instruccion.
(3) Real órden de 4 de Octubre de 1855.
(4) Art. 103 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, atrib. 5.ª de los gobernadores, y Real órden de 8 de Junio de 1859.

Hecha por el jefe ecónomico la declaracion de ser de mayor ó menor cuantía la finca ó suerte que se saca á la venta, y la designacion del dia y hora en que haya de celebrarse el remate, corresponde al comisionado de ventas disponer la publicacion de los anuncios para la subasta. Estos anuncios han de espresar los nombres del juez y escribano que hayan de entender en la subasta: el dia, hora y sitio en que deba celebrarse el remate; la corporacion ó persona, á que pertenecieron la finca ó fincas: su clase, cabida, situacion, renta anual, cargas, precios de la tasacion y capitalizacion, y en su caso la época en que concluye el arriendo (1). Tambien se espresan en estos anuncios los edificios que haya en la finca, y su estado; los árboles, viñas, etc., y su clase; las servidumbres activas y pasivas, ó derechos y cargas que tenga la finca, y el nombre de los peritos que la tasaron, como igualmente el precio que sirve de tipo para la subasta, que debe ser el mas alto entre la tasacion y la capitalizacion (2), insertándose por último las condiciones á que han de sujetarse los licitadores.

Estos anuncios, cuando la finca sea de mayor cuantía, han de publicarse á la vez en el *Boletin oficial* de la provincia y en el *general de ventas* de Madrid, con la anticipacion necesaria para que trascurran precisamente los 30 dias que, segun se ha dicho, han de mediar desde la publicacion del anuncio hasta el dia de la subasta. Si la finca es de menor cuantía, solo se publican en el *Boletin* de la provincia. En ambos casos han de fijarse, además, edictos en los sitios públicos de costumbre de la cabeza del partido judicial y del pueblo donde radique la finca. Con aquel objeto el comisionado de ventas debe pasar con la debida anticipacion un ejemplar del anuncio á dicho *Boletin oficial* de la provincia para su insercion en el mismo el dia correspondiente, y remitir otro á la Junta superior de ventas, por conducto del Director, para su conocimiento y para que disponga tenga lugar en Madrid la publicacion del anuncio en el *Boletin general*, y la celebracion de la tercera subasta, si la finca es de mayor cuantía (1).

Luego que se haya publicado el anuncio de la finca ó fincas que hayan de rematarse, el comisionado de ventas debe remitir al juez de la capital y al del partido, que hayan de entender en la subasta, ejemplares del *Boletin oficial* donde aquel se halle inserto, á fin de que por ante el escribano á quien corresponda, que será el espresado en el mismo anuncio, se instruya el espediente para el remate. A los jueces de Madrid se les pasa un ejemplar del *Boletin general de ventas*, cuando las fincas son de mayor cuantía. Ya hemos dicho en la seccion anterior, que este servicio se presta por turno entre los jueces de primera instancia, donde hay mas de uno, y entre los escribanos de los respectivos juzgados.

En cada espediente pueden comprenderse diversas fincas ó suertes, aunque cada una de ellas se haya tasado y deba rematarse por separado y en diferentes actos. En el propio espediente debe acordar el juez del partido donde radique la finca, que se fijen los edictos antes indicados; y el de la capital, que se remita con la oportuna órden un ejemplar del *Boletin*, que para ello debe pasarle el comisionado de ventas, al alcalde del lugar donde esté situada la finca, para que disponga que en los sitios de costumbre se fijen tambien los indicados edictos, exigiéndole recibo ó aviso de haberlo ejecutado, el que se unirá al espediente. En estos edictos debe espresarse la finca, procedencia, cabida, tasacion, sitio, dia y hora del remate, y ante qué autoridad se celebra. El escribano estenderá la oportuna diligencia de haber puesto en el correo el pliego para dicho alcalde (2), así como debe acreditar del mismo modo haberse fijado los edictos en la cabeza del partido.

En el propio espediente de subasta debe

(1) Art. 123 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.
(2) Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

(1) Arts. 103, oblig. 7.ª y 9.ª de los comisionados, 122, 124, 125 y 126 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.
(2) Arts. 103, oblig. 9.ª de los comisionados, 127 y 130 de dicha instruc., y la Real órden de 18 de Diciembre de 1858.

acordar el juez que se cite, para que concurra al acto de la misma, al procurador síndico del ayuntamiento donde haya de celebrarse aquella. Esta citacion debe hacerla en la forma ordinaria el propio escribano que actúa en el espediente (1). Y preparado éste con las diligencias que quedan espuestas, se celebrará el remate en el dia y hora designados, del modo que se espondrá en el §. 6.° de esta seccion.

§. 5.° *Condiciones de las subastas.*

En el art. 132 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se fijaron las condiciones, bajo las cuales deben verificarse las subastas de bienes nacionales, habiendo sido ampliadas despues por otras disposiciones. Con arreglo á todas ellas los comisionados de ventas tienen redactadas dichas condiciones, con aprobacion de la superioridad, y bajo el epígrafe de *advertencias* las insertan en los *Boletines oficiales* á continuacion de los anuncios para las subastas. Conviene conocerlas, porque en ellas se determinan las personas que no pueden hacer postura y algunas de las obligaciones del vendedor y del comprador, con otros efectos de estas ventas. Insertamos, por tanto, á continuacion las que se usan generalmente, copiadas del *Boletin general de ventas*, citando en cada una la disposicion en que se funda, cuando no está tomada del citado artículo 132. Dicen así:

»1.° No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta.

»2.° No podrán hacer postura los que de cualquier modo intervengan en la venta, siendo nulo el remate que se celebre á su favor, sin perjuicio de la privacion de empleo al que lo hiciere.

»3.° Tampoco podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacienda como segundos contribuyentes, ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus compromisos.

»4.° El precio en que fueren rematadas las fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía, y procedan *de corporaciones civiles*, lo pagará este en diez plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quince dias siguientes al de notificarse la adjudicacion, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, segun se previene en la ley de 11 de Julio de 1856.

»5.° Las fincas *de mayor cuantía del clero y del Estado* continuarán pagándose en los quince plazos y catorce años que previene el artículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificacion de 5 por 100, que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el pago del 50 por 100 en papel de la deuda pública consolidada ó diferida, conforme lo dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley de 11 de Julio. Las de *menor cuantía* se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante diez y nueve años. A los compradores que anticipen uno ó mas plazos no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual; en el concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855 (1).

»6.° Por el artículo 3.° del decreto del Gobierno provisional fecha 23 de Noviembre de 1868 y publicado en la *Gaceta* del siguiente dia 24, se autoriza la admision *por su valor nominal* de los bonos del empréstito de 200 millones de escudos, en pago de las fincas que se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamortizacion.

»7.° Segun resulta de los antecedentes y demás datos que existen en la administracion de propiedades y derechos del Estado de esta provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con mas cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se indemnizará al comprador en los

(1) Dicho art. 103 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, oblig. 2.ª de los jueces y 2.ª de los escribanos.

(1) Arts. 19 de la ley y 17 de la instruccion de 11 de Julio de 1856.

términos que en la ya citada ley se determina.

»8.° Si se entablase reclamacion sobre esceso ó falta de cabida, y del espediente resultase que dicha falta ó esceso iguala á la quinta parte de la espresada en el anuncio, será nula la venta, quedando por el contrario firme y subsistente, y sin derecho á indemnizacion el Estado ni el comprador, si la falta ó esceso no llegase á dicha quinta parte (1).

»9.° Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de desamortizacion solo podrán reclamar por los desperfectos que con posterioridad á la tasacion sufran las fincas, por falta de sus cabidas señaladas ó por cualquiera otra causa justa, en el improrogable término de quince dias desde el de la posesion. La toma de posesion podrá ser gubernativa ó judicial, segun convenga á los compradores. El que, verificado el pago del primer plazo del importe del remate, dejare de tomarla en el término de un mes, se considerará como poseedor para los efectos de este artículo (2).

»10. El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios causados por los agentes de la Administracion é independientes de la voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones civiles ó criminales que procedan contra los culpables (3).

»11. Las reclamaciones que, con arreglo al artículo 175 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, deben dirigirse á la Administracion antes de entablarse en los juzgados de primera instancia demandas contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudicacion. Pasado este término, solo se admitirán en los juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los poseedores, citándose de eviccion á la Administracion (1).

»12. Los derechos de espediente hasta la toma de posesion serán de cuenta del rematante.

»13. Los compradores de fincas que contengan arbolado, tendrán que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.° de la Real órden de 23 de diciembre de 1867, se esceptúan de fianza los olivos y demás árboles frutales, pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos de una manera inconveniente, mientras no tengan pagados todos los plazos.

»14. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 dias despues de la toma de posesion por el comprador, segun la ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesion por los compradores, segun la misma ley.

»15. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas ni derribarlas sino despues de haber afianzado ó pagado el precio total del remate (2).

»16. A la vez que en Madrid tendrá lugar otro remate en el mismo dia y hora en..... (*la capital de la provincia y del juzgado donde radica la finca, si es de mayor cuantía; y si de menor, en estos dos últimos puntos solamente*).

Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que quieran interesarse en la adquisicion de las fincas indicadas.»

Estas son las condiciones, bajo las cuales se anuncian ordinariamente las subastas de que se trata. En muchos anuncios se omiten las 2.ª y 3.ª, y aun tambien la 6.ª, 8.ª, 14 y 15, sin que por esto pueda escusarse el cumplimiento de lo que en ellas se previene, puesto que se halla ordenado en las disposiciones legislativas ó del Gobierno, que quedan citadas. Lo propio ha de entenderse respecto de las condiciones 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª de las con-

(1) Real órden de 11 de Noviembre de 1863.
(2) Art. 7.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865.
(3) Art. 8.° de id.—Para los efectos de esta disposicion, á los peritos tasadores no se les puede considerar como agentes de la Administracion por los actos de medicion y declaraciones periciales. Declaracion hecha por Real órden de 30 de Marzo de 1867.

(1) Art. 9.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865.
(2) Art. 178 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

signadas en el citado art. 132 de la instruccion de 1855, que tampoco suelen incluirse en los citados anuncios, sin que se nos alcance la razon de tal supresion. Estas condiciones, que pueden verse testuales en la *parte legislativa*, se refieren á la garantía que debe dar en el acto el mejor postor, limitada hoy á identificar su persona y domicilio; á lo que deberá hacerse en el caso de anularse la postura por falta de dicha garantía; á las cargas que han de quedar de cuenta del comprador, y las que han de rebajarse del valor de las fincas, y á la prohibicion de vincularlas y pasarlas á manos muertas en lo sucesivo.

Como en las condiciones 4.ª y 5.ª, de las insertas anteriormente, se fijan los diferentes plazos en que han de pagarse las fincas rematadas, segun sean del Estado ó de corporaciones civiles, se espresa por último, al final de los anuncios, para conocimiento de las personas que quieran interesarse en la subasta, los bienes que corresponden á cada una de dichas clases, por medio de las siguientes *notas*:

«1.ª Se consideran como bienes de corporaciones civiles, los del estinguido patrimonio de la Corona, los de propios, beneficencia é instruccion pública, cuyos productos no ingresen en las cajas del Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y á los pueblos.

2.ª Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de instruccion pública superior cuyos productos ingresen en las cajas del Estado, los del secuestro del ex-infante don Cárlos, los de las órdenes militares y de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras pías, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundacion, á escepcion de las capellanías colativas de sangre.»

§. 6.º *Celebracion de la subasta y remate: personas que pueden hacer postura.*

Ya hemos dichos que si los bienes son de mayor cuantía, esto es, si su valor en tasacion ó capitalizacion escede de 2,000 escudos, han de subastarse simultáneamente, en un mismo dia y hora, en Madrid, en la capital de la provincia y en la del partido judicial donde radique la finca, y si son de menor cuantía, solo en los dos últimos puntos; y que en este último caso solo se celebra una subasta en la capital de la provincia, cuando los bienes radican en el partido judicial de la misma capital. Con esta doble ó triple subasta se facilita la concurrencia de licitadores á fin de obtener la mayor ventaja en el precio, y el celebrarlas á la vez en un mismo dia y hora tiene por objeto evitar confabulaciones reprobadas, que aunque penadas en el libro 2.º, tít. XIV (1), cap. 5.º del Código penal, que trata *de las maquinaciones para alterar el precio de las cosas*, bueno es prevenirlas, como debe hacerlo toda administracion previsora. Al propio fin está mandado que en los dias en que se verifiquen subastas para la venta de bienes nacionales, queden sin curso los despachos telegráficos privados, relativos á ellas (2).

Las subastas se celebran en las casas consistoriales, tanto en Madrid, como en los demás puntos. Además del juez de primera instancia y escribano, á quienes corresponda autorizarlas, deben concurrir al acto el comisionado de ventas, principal ó subalterno, segun el punto en que se verifique, como representante de la Hacienda, y el procurador síndico del ayuntamiento, que, como se ha dicho, debe ser citado préviamente para ello por el escribano (3). La falta de asistencia de dicho procurador síndico, toda vez que haya sido citado en debida forma, no impide ni dilata la subasta á la hora anunciada, ni vicia por tanto la validez del acto, segun la jurisprudencia establecida por la Junta superior de ventas. No así respecto de los otros tres funcionarios, cuya concurrencia, ó la del que haga sus veces, es indispensable.

(1) Hoy tít. XIII, tambien cap. 5.º en el Código penal reformado, mandado publicar provisionalmente, en virtud de autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 17 de Junio de 1870.

(2) Real órden de 31 de Enero de 1861.

(3) Art. 131 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

El acto de la subasta y remate consiguiente es el mas solemne é importante de todos los que conducen á la realizacion de la venta: cualquier vicio ó ilegalidad en él sería motivo de nulidad. Por esto el juez de primera instancia, á quien corresponde presidirlo y determinar su duracion, debe ejercer la mayor vigilancia para que se cubran todas las formalidades legales, y emplear el lleno de su autoridad para que los licitadores tengan la libertad y proteccion necesarias, conduciéndose por su parte con la mayor imparcialidad y prudencia en la admision de posturas y en dar por concluido el acto. La duracion de este queda á su discrecion, como se ha indicado, y cualquier abuso de esta facultad, que le concede la ley, seria de trascendentales consecuencias para los intereses del Estado y de los mismos licitadores. Si el juez favoreciese á uno de estos dando por terminado el acto hecha su postura, cuando habia otros que deseaban mejorarla, cometeria una notoria injusticia, incurriendo en la responsabilidad consiguiente.

Al tratar de las incidencias de las ventas nos harémos cargo de los efectos que producen las faltas cometidas en las subastas. Ahora espondremos lo relativo á las personas que pueden hacer postura, á las solemnidades de estos actos, y garantía que debe dar el mejor postor.

Personas que pueden hacer postura. Todo español ó estranjero que tenga la libre administracion de sus bienes, puede hacer postura en las subastas de que se trata. Aunque la legislacion especial del ramo no exije espresamente esta última circunstancia, es de derecho comun y no puede menos de observarse, toda vez que el que carece de ella no puede contratar ni obligarse. Segun la condicion 3.ª del art. 132 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, se han de admitir las posturas de todos los que se presenten á licitacion, sin hacer distincion entre españoles y estranjeros; y como estos tienen hoy la facultad de adquirir en España, de aquí el que puedan concurrir tambien á esas licitaciones, segun se previno ya espresamente en el art. 4.° del Real decreto de 19 de Febrero de 1836. La única garantía que se exije, no á todos los licitadores; sino al mejor postor, es que identifique su persona y domicilio en la forma y para los efectos que luego se espondrán.

Esa ámplia facultad para hacer postura tiene tres limitaciones, establecidas en las condiciones 1.ª y 2.ª del citado art. 132, y en el 162 de la propia instruccion, que suelen espresarse en los anuncios de la subasta. Segun ellas, no pueden hacer postura: 1.° los que de cualquier modo intervengan en la venta: 2.° los que sean deudores á la Hacienda como segundos contribuyentes, ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus compromisos; y 3.° los compradores de bienes nacionales que hayan sido declarados en quiebra por no haber satisfecho el precio del remate.

En cuanto á la primera escepcion, deben considerarse comprendidos en ella todos los que por razon de su cargo intervienen mas ó menos directamente en la venta, ó en la instruccion del espediente y en las operaciones preparatorias de la misma. Podrá alcanzar, pues, en su caso al Director general del ramo, á los individuos de la Junta general y de la provincial respectiva de ventas, al gobernador y jefe económico de la provincia, al jefe de la seccion de propiedades y derechos del Estado y demás empleados de la misma que intervengan en estos espedientes, á los comisionados de ventas, al procurador síndico, juez y escribano que intervengan en la subasta, y á los peritos que practicaron la tasacion de la finca. No alcanza dicha prohibicion á los investigadores de bienes nacionales, aunque se trate de fincas descubiertas por los mismos, en razon á que no intervienen en ninguna operacion de la venta, como se declaró por Real órden de 30 de Setiembre de 1862.

Los comprendidos en dichas prohibiciones, que hagan postura, por este solo hecho han de ser privados de su empleo, segun previene la citada disposicion 1.ª del art. 132, lo cual habrá de entenderse sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que puedan haber incurrido conforme al art. 324 del Código

penal (1). Esta se exigirá judicialmente, pasándose al juzgado correspondiente los antecedentes necesarios; y la privacion de empleo podrá imponerse por el Gobierno, dejando cesante ó destituyendo al empleado en uso de sus facultades.

La propia disposicion declara nulo el remate que se celebre á favor de cualquiera de los comprendidos en la primera escepcion, ó sea de los que hagan postura á pesar de tener intervencion en la venta de algun modo por razon de su cargo (2). Igual declaracion debe entenderse respecto de los comprendidos en la 2.ª y 3.ª prohibicion: la ley solo dice que no se les admitirá la postura; pero si se les admite por no constar que sean quebrados ó deudores á la Hacienda por contrato ó como segundos contribuyentes, y despues se justifica alguna de estas circunstancias, la nulidad del remate será la resolucion procedente.

¿Deberá el juez repeler de oficio, ó á instancia de cualquiera de los concurrentes, en el acto mismo de la subasta, la postura que haga alguno de los comprendidos en las prohibiciones indicadas? La ley los declara incapaces, no solo para adquirir los bienes; sino tambien para hacer postura; y aun respecto de los deudores á la Hacienda y de los declarados en quiebra dice terminantemente que no les será admitida. De consiguiente, el juez deberá repeler ó no admitir la postura cuando del registro de los declarados en quiebra, que á este fin deben llevar los comisionados de ventas, segun el art. 165 de la citada instruccion de 1855, de documento fehaciente ó del espediente mismo resulte comprobada la incapacidad; pero si no resulta, y el interesado la niega ó contradice, como el acto no puede interrumpirse ni suspenderse para justificar ese estremo, habrá de admitir la postura, consignando en su caso la reclamacion ó protesta para que, justificada, se declare á su tiempo la nulidad del remate.

Solemnidades y garantías. Sentados estos precedentes, veamos la forma en que ha de verificarse el acto de la subasta y remate. Y aun debemos recordar que cuando en un mismo espediente se hayan incluido varias fincas, cada una de ellas ha de subastarse con separacion ó en actos diferentes, uno á continuacion del otro, y siguiendo el órden con que hayan sido anunciadas.

Constituido el juez en las casas consistoriales, con asistencia del escribano, del comisionado de ventas y del pregonero público, y tambien con la del procurador síndico si concurre, á la hora anunciada dará principio al acto en audiencia pública, anunciándolo así á los concurrentes. El escribano hará relacion de la finca que va á subastarse, leyendo todas sus circunstancias espresadas en el anuncio de la misma. Tambien se enterará al público de las condiciones de la subasta, dando al que lo solicite las demás noticias que resulten del espediente. En seguida el pregonero público anunciará que se abre la subasta, llamando á los licitadores. El escribano irá anotando por su órden las posturas y pujas que se hagan, con el nombre y apellido de la persona que las hiciere, cuyas posturas y pujas se anunciarán en el acto al público por la voz del pregonero. Y cuando el juez crea prudente terminar el acto por no haber quien mejore la última postura, mandará que se aperciba el remate con las voces de costumbre, y lo dará por terminado y por rematada la finca á favor del mejor postor; lo que anunciará tambien al público el pregonero, espresando el nombre del rematante y la cantidad por la cual ha quedado á su favor la finca: todo en la forma y con las solemnidades acostumbradas para las subastas judiciales. Y de todo ello, y en su caso de las reclamaciones y protestas que se hagan, se estenderá en el espediente la correspondiente acta, que firmarán el juez, el comisionado y el mejor postor, y autorizará el escribano, el cual unirá tambien al mismo espediente, como medio de comprobar cualquiera diferencia que pueda

(1) Hoy conforme al art. 412 del Código penal reformado en 1870.

(2) Por Real decreto-sent. del Consejo de Estado, de 16 de Junio de 1867, se declaró la nulidad de una venta, por haber sido rematada la finca á favor de una persona que fué citada como representante del comisionado de ventas ó de arbitrios de amortizacion, á pesar de que no concurrió al acto en este concepto.

aparecer, la nota antes indicada, que habrá tomado durante la subasta, de los nombres de los licitadores y de las posturas y pujas que hayan ido haciendo sucesivamente (1).

En el mismo acto de dar por concluido el remate, debe exigir el juez del mejor postor, que identifique su persona y domicilio. Esta es la única garantía que puede exigírsele, segun lo prevenido en el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, que reformó lo dispuesto en el 103 de la instruccion de 1855, núm. 5.° de las atribuciones de los jueces, segun el cual el mejor postor debia presentar el recibo del último trimestre de la contribucion que hubiese pagado, la que habia de ser de 500 reales anuales cuando menos, y en su defecto un fiador de notoria responsabilidad. Es verdad que á la vez que se suprimió esta garantía, mucho mas eficaz que aquella para asegurar el cumplimiento de la obligacion contraida por los rematantes, se dispuso por los artículos 38 y 39 de dicha ley, que se imponga una multa, que no ha de bajar de 1,000 rs., con la prision subsidiaria caso de insolvencia, al que no pague el primer plazo en el término prevenido. Pero bien pronto demostró la esperiencia, que las personas dedicadas al tráfico inmoral de concurrir á las subastas de bienes nacionales sin otro objeto que el de sacar una *prima* ó cantidad alzada de los que de buena fé desean adquirirlos, y por cuya circunstancia se las dá la denominacion de *primistas*, habian encontrado el medio de eludir dicha responsabilidad y la criminal en que incurren, en el caso de quedar rematada la finca á su favor sin haber conseguido su objeto. Este medio consistia en alterar su nombre ó domicilio para sustraerse á la accion de la justicia; ó en ceder el remate á favor de individuos insolventes, y á quienes por su posicion social nada importaba sufrir la prision subsidiaria.

Haciéndose cargo de estos abusos la Real órden de 18 de Febrero de 1860, y á fin de prevenirlos en lo posible, dispuso, entre otras cosas, que la identidad de la persona y domicilio de los postores se justifique, mediante diligencia en el acto del remate ante el juez y escribano que lo autoricen, con dos testigos de notoria solvencia á juicio del juez y del comisionado de ventas, cuyos testigos admitirán la responsabilidad de manifestar, en caso de que la finca sea declarada en quiebra, cuál sea el verdadero domicilio del rematante, si éste no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incurran si hubiera existido alguna falsedad en la primera diligencia. Y por otra Real órden de 25 de Enero de 1867 se previno que se haga constar tambien en dicha diligencia el nombre y domicilio de los testigos que abonen al postor, con el objeto de poderles exijir la responsabilidad antes indicada, como se espondrá mas adelante. Todo esto deberá consignarse en la propia acta de la subasta, ó á continuacion de la misma en diligencia separada, que firmarán igualmente, con los testigos de abono y rematante, el juez, comisionado y escribano.

Si el mejor postor no puede justificar en el acto, del modo antes espuesto, la identidad de su persona y domicilio, queda anulada su postura, y se tiene por válida la inmediata, si el que la hubiere hecho se ratifica en ella. Mas, en tal caso no ha de darse por terminado el remate á favor de éste; sino que ha de continuar la licitacion, abriéndose de nuevo la subasta, para que sobre la postura ratificada se hagan cuantas puedan convenir á los demás licitadores, hasta que deje de haber quien mejore las hechas (1). Si no hay quien mejore la postura ratificada, se dará por celebrado el remate á favor del que la hizo. Dedúcese tambien del contesto y espíritu de la ley, aunque no lo dice espresamente, que si el que hubiere hecho la postura inferior no quiere ratificarla, podrá hacerlo el que le siga en órden inferior, y así sucesivamente; y si ninguno de los postores quiere ratificar su postura, se dará por terminado el acto sin resultado para el remate, lo propio que cuando no hay postor. En este punto se han seguido los principios del derecho comun, separándo-

(1) Arts. 103 y 131 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

(1) Disposicion 4.ª del art. 132 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

se de la jurisprudencia que venia rigiendo en las subastas de rentas reales, segun la cual todos los postores quedaban obligados gradual y sucesivamente para el caso de que no cumpliera el rematante.

Celebrado el remate de la primera finca ó suerte comprendida en el espediente, ó terminado el acto sin resultado por no haberse presentado ningun postor, de lo cual se estenderá tambien la correspondiente acta para acreditarlo, que firmarán el juez, comisionado y escribano, se procederá en la propia forma á la subasta de la segunda finca, si la hubiere, y así sucesivamente, estendiendo un acta separada para cada finca.

Terminadas todas las subastas, los comisionados de ventas, inclusos los subalternos que asisten á las de las cabezas de partido, deben remitir en el mismo dia directamente á la Direccion general del ramo una nota, en forma de estado, del resultado de aquellas, firmada por el mismo comisionado y el escribano de las subastas con el V.° B.° del juez (1). Estos estados han de estenderse por duplicado, y para facilitar la operacion debe llevarlos preparados el comisionado, dejando en blanco las casillas del precio del remate y del nombre del comprador, para llenarlas concluidas las subastas. El comisionado se queda con un ejemplar, y el otro, firmado tambien por los rematantes, es el que ha de remitir á la Direccion, cerrándolo antes de levantarse el tribunal, y consignándose esta circunstancia por diligencia en el espediente de remate. Con tales precauciones se impide toda sospecha de alteracion, y la Junta superior de ventas tiene ese dato para comprobar la exactitud del testimonio del remate, y proceder con seguridad á la adjudicacion de la finca, depurando préviamente cualquiera equivocacion que pueda haberse cometido (2).

Concluida la subasta debe acordar el juez, haya habido ó no postor, que el escribano libre con referencia al espediente el testimonio prevenido de cada remate, y que uno y otro se remitan, dentro de las 48 horas siguientes á la subasta, al comisionado de ventas para el curso correspondiente (1). Estos testimonios han de estar arreglados al modelo aprobado por la citada instruccion de 1855, espresándose además en su caso el domicilio del mejor postor y el nombre y domicilio de los testigos que le abonaron, como se previno en Real órden de 25 de Enero de 1867 (2). Segun dicha instruccion, estos tes-

(1) Art. 103 de la cit. instrc. de 31 de Mayo de 1855, oblig. 10 de los comisionados.

(2) Circular de la Direccion de 23 de Junio de 1856.

(1) Arts. 103, 133, 134 y 180 de dicha instruccion de 31 de Mayo de 1855.

(2) El modelo oficial para dichos testimonios, aprobado y publicado con la instrc. de 31 de Mayo de 1855, con las *advertencias* que el mismo contiene, y la adicion hecha por la citada Real órden de 25 de Enero de 1867, es el siguiente:

NÚM. DE ÓRDEN DEL INVENTARIO. — BENEFICENCIA.

Provincia de... (Menor ó mayor cuantía). **Al hospital de...**

Yo el Escribano, etc., doy fé: Que habiendo dispuesto el Sr. Gobernador (hoy el Jefe económico) de esta provincia se pusiese en venta una tierra sita en...., término del...., que perteneció al hospital de la misma ciudad (ó pueblo) se practicó la tasacion por los peritos nombrados por el Estado y el procurador síndico de dicha *ciudad*, resultando de la operacion que la espresada finca tiene de cabida..... fanegas: que linda con otra del cabildo colegial de la citada ciudad (*se pondrán los linderos*), y ser su valor en venta..... reales en metálico y..... fanegas de trigo en renta, y habiéndose declarado por los peritos no ser divisible, y formándose por la Contaduría la capitalizacion de su valor en venta por el decenio de 1845 al 54, que es el de..... conforme á lo dispuesto en la ley de 1.° de Mayo é instruccion de 31 del mismo para llevarla á efecto, ascendió aquella á la suma de....., siendo menor que la tasacion (*ó al contrario*), por lo cual prevaleció esta como tipo del remate, y en su consecuencia y habiéndose declarado por el Gobernador ser la finca de (*mayor ó menor cuantía*) se anunció la subasta para el dia..... ...., en que ya serian trascurridos los treinta que se previene en la citada instruccion, con la espresion de que la referida finca estaba gravada segun los informes de las precitadas oficinas con un censo de 2,000 rs. de capital impuesto al rédito anual de 3 por 100 á favor de los canónigos de la Colegial de dicha ciudad, y de otro de 200 reales con rédito al 2 por 100 á favor de J. P. (*ó que no tenia gravámen alguno*), y que se hallaba arrendada hasta el dia..... de....., cuyo arriendo solo quedaria obligado á respetar hasta el cumplimiento del año en que se publicó la ley de 1.° de Mayo; que llegado el dia..... señalado para el remate, y reunidos en una de las piezas de las casas consistoriales los Sres. D. P. M., juez de 1.ª instancia, D. M. M., comisionado de ventas de

timonios debian pasarse con el espediente de subasta al gobernador para la aprobacion del remate, del modo que se dirá en el párrafo 8.°; pero conforme á las disposiciones 2.ª y 3.ª de la Real órden antes citada, los espedientes y testimonios han de remitirse por los jueces que han entendido en las subastas al comisionado de ventas en el preciso término de 48 horas, como ya se ha indicado, y éste remitirá en el mismo dia, ó á mas tardar en el siguiente, los referidos testimonios á la Direccion general del ramo. De esto se deduce que solo el espediente es lo que ha de pasarse hoy al jefe económico.

Concluiremos este párrafo recordando una declaracion importante hecha por el Consejo de Estado sobre la materia de que se trata. Celebrada una subasta, y dado por terminado el acto, seguidamente uno de los licitadores mejoró la postura en cantidad considerable, y el juez lo consignó por diligencia, admitiendo la postura sin perjuicio, por haber sido hecha fuera del remate. La Junta superior de ventas declaró que no era admisible esta postura, y adjudicó la finca al que habia hecho la mas alta dentro de la subasta. El interesado se alzó de este acuerdo, que fué aprobado de Real órden, la cual á su vez fué confirmada por el Real decreto-sentencia de 20 de Diciembre de 1866. Se fundó para ello el Consejo de Estado en que «todo remate público es un acto solemne que no puede interrumpirse, y cuya duracion determina la autoridad que lo preside: que dado por concluido un remate por declaracion del juez y anuncio de la voz pública, no procede otra cosa que exigir las garantías y práctica las diligencias necesarias para asegurar el cumplimiento de la última postura; y que no siendo verdadera postura la que se hace despues de terminado el acto, no puede apreciarse en perjuicio de legítimos derechos de otro licitador, que resultó mejor postor dentro de la subasta celebrada.»

§. 7.° *Segunda y ulteriores subastas por falta de postor en las anteriores.*

Puede suceder, y sucede con frecuencia, que en la primera subasta no tenga efecto el remate por falta de postor. En tales casos preciso será repetir las subastas, si se ha de conseguir la venta de la finca; pero rebajando el precio que ha servido de tipo, porque de otro modo seria probablemente inútil la diligencia, pues es de suponer que la falta de licitadores consiste en ser alto el tipo establecido, ó inadmisible por tanto para los compradores.

Segun la instruccion de 31 de Mayo de 1855, correspondia acordar la celebracion de la segunda subasta, en los casos de que se trata, á la Junta superior de ventas, si la finca era de mayor cuantía; y al gobernador de la provincia, en las de menor cuantía. Estas subastas se habian de anunciar en los *Boletines oficiales* igualmente que las primeras, con la sola diferencia de que no habian de mediar mas que 20 dias desde el anuncio al remate; y el tipo para ellas era el menor valor dado á la finca entre la tasacion y la capitalizacion (1). Y solo en el caso de que no hu-

---

este partido, con citacion del Procurador síndico y por ante mí, se dieron repetidos pregones á los licitadores que hicieron diferentes posturas, hasta que llegada la hora se verificó el remate á favor de D. M. P., vecino de....., como mejor postor, en la cantidad de..... rs. á pagar en los términos y plazos prevenidos en la citada ley y en la de 11 de Julio de 1856. Dicho mejor postor D. M. P. tiene su domicilio en....., calle de....., núm..... y ha sido abonado por los testigos N. y N. los cuales tienen tambien su domicilio en la misma poblacion (*ó donde sea*), el primero en la calle de.... núm..... y el segundo en la de..... núm....

Y para que conste, en virtud de lo ordenado por el Gobernador y con arreglo á lo dispuesto en la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y con referencia al espediente actuado ante mí, y que remito con el presente al Sr. Gobernador, doy este que signo y firmo en..... á..... de. ... de.....

«ADVERTENCIAS.—1.ª En los testimonios de los partidos se insertará íntegro el oficio que se pase á los juzgados, y el anuncio puesto en el *Boletin oficial*.

2.ª Se espresará en los testimonios el número de órden que corresponda á cada finca, para lo cual, así como para que pueda ponerse el precio de la especie, las contadurías marcarán ambos datos al practicar las capitalizaciones.

3.ª Que se han de espedir tantos testimonios cuantas sean las fincas que se subasten.»

(1) Respecto de las fincas del clero que no deben tasarse, segun se espuso en el §. 1.° de esta seccion, está prevenido que salgan á primera subasta por el tipo de capitalizacion segun su renta;

biera postor en el primero ni en el segundo remate, podia procederse á la retasa de la finca; pero siempre en virtud de acuerdo de la Junta superior (1).

Para evitar los inconvenientes y perjuicios que de este sistema se seguian al Estado, tanto por las dilaciones y gastos que exigian dichos procedimientos, como por la desproporcion entre los tipos de una y otra subasta, pues en algunos casos entre la tasacion y la capitalizacion resultaba la enorme diferencia de un 50 y hasta de un 80 por 100, y no llegaba á cubrirse el valor del arbolado, se dictaron las Reales órdenes de 27 de Octubre de 1866 y 10 de Marzo de 1868, que pueden verse en la *parte legislativa*. Ultimamente se organizó este servicio por el Real decreto de 23 de Agosto del propio año 1868, con fuerza de ley en virtud de la autorizacion concedida al Gobierno por el art. 23 de la de presupuestos de 29 de Mayo anterior, derogando espresamente todas las disposiciones anteriores, referentes á los tipos de las subastas y al órden de acordarlas, que fueren contrarias á las de dicho decreto.

Segun él, han de ser cuatro las subastas ordinarias de las fincas desamortizables, las que acordarán los gobernadores, hoy los jefes económicos de las provincias, sucesivamente y sin consultar á la Junta superior de ventas, tan pronto como se les dé cuenta de que en la anterior subasta no tuvo efecto el remate por falta de licitadores. Estas subastas se anunciarán, la primera con 30 dias de anticipacion, y las demás con 20 solamente, como estaba mandado.

Todas las fincas han de tasarse por su valor en venta y renta, capitalizándose por la renta que produzcan, y á falta de esta por la que gradúen los peritos, y sirviendo de tipo para la primera subasta el que resulte mayor entre la tasacion y capitalizacion, como estaba tambien prevenido; pero se establecen nuevos tipos para las ulteriores. Para la segunda subasta servirá de tipo el 85 por 100 del que sirvió para la primera: para la tercera el 70 por 100; y para la cuarta el 55 por 100 del mismo tipo primitivo: de suerte que del precio mayor que resulte entre la tasacion y capitalizacion ha de rebajarse un 15 por 100 para la segunda subasta, un 30 por 100 para la tercera, y un 45 por 100 para la cuarta, y lo que reste en cada caso servirá de tipo para la subasta respectiva.

Si en ninguna de estas cuatro subastas se presentasen licitadores, y el valor designado á la finca en la tasacion ó capitalizacion fuese inferior al que sirvió de tipo para la cuarta, aun se ha de celebrar una quinta subasta, que acordará en seguida el jefe económico, sirviendo de tipo para ella el indicado precio inferior de la tasacion ó capitalizacion.

En todos estos casos han de librarse los testimonios del remate ó de que no hubo postor, y entregarse con el espediente al comisionado de ventas dentro de 48 horas, para que este los pase al jefe económico y se remitan aquellos á la Direccion general del ramo, lo propio que las notas ó estados del resultado de la subasta, todo en la forma espuesta en el párrafo anterior. Pero en los testimonios debe hacerse mencion del primer remate y de la cantidad que sirvió de tipo para este (1). Igual mencion deberá hacerse en los anuncios, espresando si es segunda, tercera, cuarta ó quinta subasta, y la cantidad rebajada de la primera para formar el tipo de la que se anuncie.

Intentados sin resultado los cuatro remates referidos, y el quinto en su caso, quedará abierta la subasta y se recibirá cualquiera proposicion que por escrito se presente al jefe económico de la provincia. Con vista de la misma y bajo la base de su oferta, se anunciará una nueva subasta, y si no hay quien mejore la proposicion, quedará el remate á favor del que la hizo. En este caso han de remitirse á la Direccion del ramo el testimonio del remate, el espediente de tasacion y el de

y cuando por falta de postores haya de celebrarse segunda licitacion, se verifique ésta por aquel mismo tipo, pero con rebaja de 5 por 100 de su importe. (*Real órden de 18 de Junio de 1863.*)

(1) Arts. 181, 182, 183 y 185 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

(1) Art. 184 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

las subastas anteriores, para los efectos que se indicarán en el parrafo siguiente. A dicho fin deben ordenar los jefes económicos que las fincas, cuya subasta queda abierta, se comprendan en una lista que se publicará cada dos meses en el *Boletin oficial* (1).

Escrito lo que precede se ha publicado el decreto de 23 de Junio de 1870, por cuyo artículo 10 se ha modificado algun tanto el último punto de los espuestos anteriormente. Ordena que, verificadas sin resultado las cuatro subastas, ó las cinco en su caso, en vez de quedar en todo caso abierta la subasta, acordará la Direccion, segun lo estime mas conveniente á los intereses del Estado, la retasa de la finca por peritos distintos de los que hicieron el primer justiprecio, ó que quede abierta la licitacion en los términos antes indicados; pero en este último caso no se admitirá proposicion que no cubra el 30 por 100 del tipo por el cual se anunció la finca en la primera subasta. Cuando se acuerde la retasa, los derechos de los peritos que la verifiquen, han de ser pagados por el rematante de la finca. Y se declaran sin efecto al propio tiempo por el art. 13 los remates, cuyas adjudicaciones aun estuviesen sin acordar, de los celebrados en subastas abiertas conforme al Real decreto de 23 de Agosto de 1868.

§. 8.° *Aprobacion del remate y adjudicacion de las fincas: sorteo en los casos de empate.*

Los jueces de primera instancia de la capital de la provincia y del partido deben pasar al respectivo comisionado de ventas los espedientes de subasta y testimonios del remate, segun se dijo en el párrafo 6.° Así que los reciba el comisionado de la capital, debe dar cuenta al gobernador, hoy al jefe económico, á quien corresponde aprobar los actos de dichos espedientes. Este les prestará su aprobacion, si los encuentra arreglados á las disposiciones vigentes, y sin protesta ni reclamacion atendibles, y á la vez acordará que se remitan por el primer correo á la Junta superior de ventas, por conducto del Director del ramo, los testimonios de los remates, espresando que han merecido su aprobacion los espedientes. Cuando se trate de fincas de mayor cuantía, respecto de las cuales tiene lugar la triple subasta, el jefe económico de Madrid á quien corresponde la aprobacion de los actos celebrados en esta capital, debe enviar á dicha Junta con el testimonio indicado el espediente de la subasta.

Así estaba acordado por los arts. 134 y 135, y por la atribucion 6.ª de los gobernadores del 103, de la instruccion de 31 de Mayo de 1855; pero como en la disposicion 3.ª de la Real órden de 25 de Enero de 1867 se previno que los comisionados remitan á la Direccion general los espresados testimonios en el mismo dia que los reciban del juzgado, ó á mas tardar en el siguiente, los jefes económicos ya no pueden hoy verificar dicha remesa, y habrán de limitarse á dar cuenta á la Junta superior de la aprobacion del espediente.

Tambien pueden desaprobarlo, y así lo acordarán siempre que se haya faltado á la ley en su instruccion, ó contenga protestas y reclamaciones atendibles, ó el mejor postor sea alguna de las personas incapacitadas para hacer postura, segun se dijo en el párrafo 6.°, y por cualquier otro motivo fundado. En estos casos deben motivar su resolucion, y dar cuenta á la Junta superior en la propia forma antes indicada. Cuando haya pendiente solicitud para esceptuar la finca de la venta, sobre su reivindicacion, ú otra de igual índole, que exija la suspension de la aprobacion del remate hasta que se resuelva aquel espediente, así lo informará el jefe económico á la Junta superior al darle cuenta del resultado de la subasta (1).

Puede suceder que haya *empate* en los remates; esto es, que una misma finca haya sido rematada por una cantidad rigorosamente igual en las dos ó tres subastas que se celebran simultáneamente. Previendo la ley este

(1) Arts. 7.° y 8.° del citado R. decreto de 23 de Agosto de 1868.

(1) Arts. 134 y 135 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

caso, dispone que se decida por la suerte la adjudicacion de la finca entre los que hicieron la postura igual. Este sorteo ha de acordarlo el jefe económico cuando, por ser de menor cuantía la finca, se haya celebrado la doble subasta en el partido y en la capital de la provincia, y debe verificarse ante la junta provincial de ventas con asistencia del juez y escribano que entendieron en la subasta de la capital. Y si por ser de mayor cuantía la finca, se han celebrado las tres subastas simultáneas en dichos dos puntos y en Madrid, corresponde á la Junta superior de ventas acordar el espresado sorteo, el cual ha de verificarse ante la propia Junta con asistencia del juez y escribano que hubiesen concurrido á la subasta celebrada en Madrid. En ambos casos debe librar el escribano testimonio formal del acto del sorteo, el que se entrega al comisionado de ventas para que sea remitido á la Junta superior y se una á los testimonios del remate (1).

Corresponde en todo caso á dicha Junta superior acordar la aprobacion definitiva del remate y la adjudicacion de la finca al mejor postor. Dictará esta resolucion en vista de los testimonios de los remates, y en su caso del espediente de la subasta de Madrid y del testimonio del sorteo antes indicado, despues de hacer las comprobaciones necesarias para asegurarse de la exactitud y legalidad del remate. Si en éste ó en el espediente se hubieren cometido defectos que lo invaliden, declarará su nulidad y que se exija la responsabilidad á quien corresponda. Y si hubiere alguna solicitud pendiente sobre la misma finca, que exija una resolucion prévia, deberá suspender la aprobacion del remate y la adjudicacion de la finca hasta que se resuelva aquel espediente (2).

En el caso indicado al final del párrafo anterior, de quedar abierta la subasta por no haber habido postor en las cuatro ó cinco anteriores, y admitirse cualquiera proposicion que despues se haga, siempre que cubra el 30 por 100 del tipo fijado para la primera subasta, no puede la Junta superior resolver sobre la aprobacion del remate y adjudicacion de la finca sin oir préviamente el parecer de la Asesoría, hoy de la seccion de letrados del Ministerio, y el de la Direccion del ramo. Si están de acuerdo estas dos dependencias en favor de la aprobacion, puede acordarla por sí la Junta, como en los demás casos; pero si no existiese aquel acuerdo, debe consultar la resolucion al Ministerio de Hacienda, y sin su aprobacion no puede llevarse á efecto (1).

Acordada la adjudicacion, debe el Director del ramo comunicar sin demora la órden oportuna al gobernador, hoy al jefe económico de la provincia respectiva, con espresion del nombre del mejor postor, de la finca y cantidad en que le haya sido adjudicada, para que se lleve á efecto la consumacion de la venta, en la forma que se espondrá en los párrafos siguientes. Y al propio tiempo debe disponer que en el *Boletin oficial de ventas* se publique el nombre y domicilio de la persona á quien la Junta haya adjudicado la finca ó fincas, y la cantidad que haya de pagar (2).

§. 9.° *Liquidacion de cargas.*

En el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 se consignó el justo principio de que se verificaria la venta de los bienes nacionales *sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos.* Estas cargas pueden ser á favor del mismo Estado, ó al de particulares y corporaciones cuyos bienes no han pasado á ser propiedad de la nacion. En el primer caso, como viene á ser una misma persona el acreedor y deudor de la carga, sea censo, servidumbre ó de otra clase, quedó ésta confundida ó consolidada en el Estado, y por tanto estinguida de derecho, por el principio de que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo; y de consiguiente, la venta se reputa hecha libre de tales cargas. En este caso se hallan las que gravitan sobre los bie-

(1) Arts. 138, 139 y 140 de la citada instr.
(2) Art. 135 de id.

(1) Arts. 7.° del Real decreto de 23 de Agosto de 1868, y 11 del decreto de 23 de Junio de 1870.
(2) Artículos 136 y 137 de la citada instruccion de 31 de Mayo de 1855, y 4.° de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

nes clasificados como del Estado para los efectos de las ventas en el §. 6.° de la sec. 1.ª, y estaban constituidas á favor del mismo Estado, del clero ó de cualquiera otra corporacion ó persona de quien procedan tales bienes: como todos pertenecen hoy al Estado, las cargas quedaron estinguidas por la confusion ó consolidacion de ambos derechos, y no son rebajables del importe de la venta (1). No así las constituidas á favor de particulares ó de corporaciones cuyos bienes están esceptuados de la venta, por ser distintas personas el acreedor y el pagador de la carga.

Conforme á estos principios del derecho comun está prevenido, que los censos y demás cargas fijas, que tengan sobre sí los bienes de corporaciones civiles, así como las que estén impuestas sobre los del Estado á favor de particulares y de corporaciones ó bienes que se hallen por la ley esceptuados de la venta, serán solo las que se rebajarán del precio del remate, quedando su pago á cargo del comprador (2). Una de las condiciones de las subastas, segun el art. 132 de la citada instruccion, es «que las cargas que graviten sobre las fincas á favor de particulares ó de los bienes esceptuados por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo, han de quedar de cuenta del comprador, siempre que sean corrientes y conocidas, pues las que fuesen á favor de las corporaciones, cuyas fincas están declaradas en venta, se enajenan con ellas, y queda su pago por cuenta del Estado.» En este caso se halla la carga de aposento, que tampoco ha de rebajarse del precio del remate de las fincas urbanas grabadas con ella (3).

Entre las cargas que deben rebajarse del precio de las fincas vendidas se cuenta la del canon ó renta anual, que corresponde en los enfiteusis al señor directo, cuando solo pertenece al Estado ó á las corporaciones civiles el dominio útil de la finca. En estos casos solo puede enajenarse el dominio útil, quedando á cargo del comprador el pago del cánon ó pension anual que corresponde al dueño directo, cuyo capital se le rebaja del precio del remate. Tambien queda á cargo del comprador el pago del laudemio, siempre que el dominio directo de la finca vendida no pertenezca al Estado ni á ninguna de las corporaciones cuyos bienes están declarados en estado de venta (1); pero esta carga no debe rebajarse del precio del remate, por no ser fija y de pago periódico, sino inherente á la enajenacion del dominio útil en favor del directo, y corresponder su pago al nuevo poseedor ó comprador de la cosa, y así debe espresarse en el anuncio. El laudemio que debe satisfacerse en estos casos, es el correspondiente al valor que hubiere servido de tipo para la subasta, y no al del precio del remate (2).

La liquidacion de dichas cargas ha de ejecutarse por la base de un 3 por 100, ó sea un 33 y un tercio al millar en los censos redimibles, que son los consignativos y reservativos, y de 1 1|2 por 100, ó lo que es igual al 66 y dos tercios al millar, en los censos perpétuos, entre los que se comprenden los enfitéuticos; bases iguales á las que se establecieron por regla general para la redencion de censos en las leyes recopiladas. Cuando la carga ó pension se pague en especie, debe liquidarse á metálico, para lo cual se tomará por tipo el precio medio que el fruto ó especie de que se trate haya tenido en el último decenio (3).

Cuando las cargas, que pesen sobre una finca subastada, estén constituidas á favor de corporaciones, cuyos bienes están declarados en venta, se practicará la liquidacion en la misma forma antes espuesta, espresando el capital y réditos y la corporacion á cuyo favor se hallen impuestas (4), no para rebajarlas del precio del remate; sino para hacer el abono correspondiente á la corporacion respectiva, como ya se ha indicado.

En el caso de ser un crédito hipotecario la

(1) Real órden de 4 de Julio de 1860.
(2) Art. 142 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, y 29 de la ley de 11 de Julio de 1856.
(3) Art. 142 antes citado. Véase APOSENTO (*Regalía de*).

(1) Arts. 10 de la ley de 1.° de Mayo de 1855; 29 de la de 11 de Julio de 1856, y 3.° y 4.° de la Real órden de 18 de Octubre de 1862.
(2) Art. adic. de la instrc. de 31 de Mayo de 1855.
(3) Arts. 142 y 143 de la citada instrc. de 31 de Mayo de 1855.
(4) Los mismos artículos.

carga que resulte sobre una finca, se venderá con esta carga, rebajando el importe del crédito del precio del remate, y siendo su pago de cuenta del comprador en la forma y plazos estipulados. Para ello deberá el acreedor presentar en la administracion económica de la provincia los documentos que legitimen su derecho: si lo verifica antes de publicarse los anuncios, se espresará en estos que la finca se vende con aquella carga; y si lo verifica despues, pero antes del remate, en el acto de éste se hará saber á los licitadores, para que tengan entendido que, afectando á la finca aquel gravámen, será rebajado su importe de la cantidad en que fuese adjudicada. No haciéndose la reclamacion antes del remate, se reputará la venta de la finca como libre de tal carga, sin perjuicio de pagar al acreedor con el producto de los primeros plazos que se realicen (1).

Espuestas las bases bajo las cuáles ha de practicarse la liquidacion de cargas de las fincas vendidas, veamos el procedimiento que para ello ha de emplearse, y el funcionario á quien corresponde ejecutarla.

Al principio se encomendó dicha liquidacion á la contaduría de Hacienda pública, despues á la administracion, y últimamente á la seccion de propiedades y derechos del Estado de la provincia en que radique la finca. Para ello, luego que el gobernador, hoy el jefe económico, reciba de la Direccion del ramo la órden de adjudicacion de la finca, debe disponer que por el comisionado de ventas se una al espediente de subasta, y que en el mismo dia se pase á dicha seccion. Esta debe practicar la liquidacion espresada en el preciso término de tres dias, y anotando en su registro el nombre del adjudicatario y el importe líquido que debe pagar, pasará en seguida el espediente al comisionado, para los efectos que se espresarán en el párrafo que sigue (2).

Indicarémos, por último, que las cargas que han de comprenderse en esta liquidacion, son las reconocidas con anterioridad á la venta, y que graviten sobre finca determinada. Respecto de las que graviten mancomunadamente sobre varias fincas ó sobre una universalidad de bienes, ha de practicarse préviamente la subrogacion de las mismas, en los casos y forma que se espondrán en la seccion VIII.

(1) Arts. 32 de la ley, y 27 de la instrc. de 11 de Julio de 1856.

(2) Arts. 141 y 144 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, y reg. 4.° y 5.° de la Real órden de 23 de Enero de 1867.

§. 10. *Notificacion al rematante de la adjudicacion de la finca: pago del primer plazo.*

Luego que el comisionado de ventas reciba el espediente de subasta con la certificacion de liquidacion de cargas, practicada del modo que se ha dicho en el párrafo anterior, debe tomar razon en su registro, y disponer que se notifique al rematante la adjudicacion de la finca para que en el término de 15 dias realice el pago del primer plazo, bajo apercibimiento de que, pasados y no haciéndolo, se procederá á nueva subasta á su costa, y con responsabilidad á satisfacer la diferencia que resulte entre el nuevo y el anterior remate.

Esta notificacion debia hacerse por el escribano de la subasta, en que se hizo la postura mayor, prévio mandato del juez, á quien para este fin pasaba el espediente el comisionado de ventas. Y si la postura mayor habia tenido lugar en la triple subasta celebrada en Madrid, el gobernador de la provincia debia remitir la certificacion de liquidacion de cargas con su V.° B.° á la Direccion del ramo, la cual la pasaba al comisionado principal de ventas de Madrid, para que, uniéndola al espediente de su razon, lo remitiera al juez de la subasta, quien debia acusar su recibo en el mismo dia, lo propio que los demás jueces, y disponer su entrega á la escribania respectiva, quedándose con nota, para que inmediatamente se hiciera la notificacion al comprador (1).

Los escribanos debian hacer dicha notificacion al rematante en la forma prevenida

(1) Art. 145 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, y Reales órdenes de 14 de Junio de 1859 y 13 de Noviembre de 1861.

por derecho para toda clase de notificaciones, dentro de los 10 dias siguientes al recibo del espediente, si los interesados residian en el mismo pueblo del juzgado, y dentro de 15 dias, cuando se hallaban en distinto pueblo y era necesario librar exhorto (1).

Hecha la notificacion, el escribano ha de proveer del oportuno testimonio del remate al adjudicatario, para que realice el pago del primer plazo, y de una nota, con el V.° B.° del juez, espresiva del importe del papel sellado que debe reintegrar en el espediente de subasta hasta la toma de posesion, para que lo pague al propio tiempo. Y en el mismo dia, ó dentro de tres cuando mas, debia dar aviso al comisionado de la provincia donde radique la finca de la fecha en que quedó notificado el comprador, con el objeto de que, trascurridos los 15 dias sin haber verificado dicho pago, pueda el comisionado solicitar del gobernador la declaracion en quiebra de la finca, y avisarlo al juez para que se exija al rematante la responsabilidad consiguiente (2).

Este era el procedimiento que desde un principio se estableció y venia empleándose para hacer las notificaciones de que se trata; pero en muchos casos se dilataba indefinidamente esta diligencia, casi siempre por la mala fé de los compradores, que se ocultaban ó mudaban de domicilio para eludir la notificacion y sus consecuencias, y alguna vez tambien por negligencia del escribano que debia practicarla. De tales dilaciones se seguian notorios perjuicios al Estado, pues ni cobraba el precio de la finca, ni podia disponer de ella, y para evitarlos se adoptó el medio de encomendar á la Administracion activa la notificacion de las adjudicaciones. Así se ordenó por la Real órden de 25 de Enero de 1867, fundándose, segun se espresa en su preámbulo, en que siendo acordadas dichas adjudicaciones por la Administracion, deben ser por la misma notificadas á los interesados para evitar dilaciones y trámites, que son igualmente dañosos al Estado que á los compradores de buena fé.

En virtud, pues, de lo dispuesto en dicha Real órden, corresponde hoy á los comisionados de ventas notificar á los compradores de bienes nacionales la adjudicacion de las fincas rematadas á su favor, quedando por tanto sin efecto todo lo que sobre este punto estaba prevenido por la instruccion de 1855 y disposiciones posteriores. Para hacer esta notificacion tienen aquellos el improrogable término de ocho dias, á contar desde que reciban de la administracion el espediente con la liquidacion de cargas. Deben hacerla por medio de cédula, en la que habrá de insertarse la órden de adjudicacion, con la prevencion de que, si no realiza el rematante el pago del primer plazo en el término de 15 dias, segun está prevenido, se procederá á nueva subasta á su costa y con la responsabilidad á satisfacer la diferencia que resulte entre el nuevo y el anterior remate. Estas cédulas han de estenderse por duplicado, para entregar la una al interesado y que firme su recibo en la otra, despues de autorizarlas el comisionado de ventas.

En la propia Real órden se dictaron las reglas oportunas para hacer estas notificaciones en los diferentes casos que pueden ocurrir. Para la inteligencia de las mismas debemos recordar, que el mejor postor debe identificar en el acto del remate su persona y domicilio con dos testigos de abono, que á la vez han de espresar cuál sea el suyo respectivo. En el supuesto de que así se habrá hecho, se dispone que se busque desde luego al rematante en el domicilio que espresó en la subasta: si este resultase cierto, y fuere habido en él el interesado, se le dejará un ejemplar de la cédula, firmando su recibo en el otro, que recogerá el comisionado de ventas; y si no fuere hallado á la primera diligencia en busca, se entregará la cédula á su mujer, hijos, criados ó dependientes, ó al vecino mas inmediato, cuando ninguno de aquellos se presentare, firmando el recibo la persona á quien se entregue la cédula. Caso de no darse razon del rematante en el domicilio espre-

(1) Real órden citada de 13 de Noviembre de 1861.

(2) Dichas Reales órdenes; art. 146 de la citada instr. de 31 de Mayo de 1856, y circular de la Direccion de 7 de Diciembre de 1864.

sado, se buscará á cualquiera de los testigos de abono en el que designaron en la subasta, y se les entregará la cédula con las propias formalidades; de lo cual se deduce que si dan razon del rematante, y consta el punto á donde ha trasladado su nuevo domicilio, en él deberá ser buscado para hacerle la notificacion. En las cédulas se ha de espresar la fecha en que se entregan, y cuando los que las recojan no sepan ó no quieran firmar, suscribirán dos testigos la nota en que se haga constar esta circunstancia.

Si el domicilio designado en el acto del remate no fuese la capital de la provincia donde deben practicarse dichas diligencias, el comisionado, obteniendo el auxilio del gobernador, hoy del jefe económico, si lo creyere preciso, remitirá las cédulas al alcalde respectivo para que entregue una al interesado y en su caso á los testigos, y devuelva la otra dentro de tres dias con la firma de haberse recibido la original, todo en la forma espuesta anteriormente. Pero esto ha de verificarse en el supuesto de que no resida en la capital de la provincia ninguno de los testigos de abono, pues si alguno de éstos residiere en ella, se entregará al mismo la cédula para que la haga llegar al interesado. No podrá servir de obstáculo para verificarlo así el que diga el testigo que ignora el paradero del rematante: los testigos de abono adquieren la responsabilidad de manifestar el domicilio de aquel, como se espuso en el párrafo 6.°, y están obligados á indagar su paradero. De todos modos la notificacion producirá sus efectos legales, puesto que se hace en la forma prevenida por la ley.

Puede suceder, por último, que ni el rematante ni los testigos sean habidos ni conocidos en el domicilio que designaron, ó que se hayan ausentado con sus familias: en tales casos se les citará desde luego por el *Boletin oficial*, y en Madrid por el *Diario de avisos*, para que dentro de 15 dias improrogables comparezcan á pagar el primer plazo. Este anuncio produce los mismos efectos que la notificacion personal.

Hecha la notificacion por cualquiera de los medios indicados, el comisionado de ventas debe unir al espediente la cédula, ó el *Boletin* y *Diario* en que se hayan publicado los edictos, y pasados los quince dias marcados por instruccion para el pago, hará que en la administracion se ponga nota de si resulta pagado el primer plazo. Caso negativo dará cuenta inmediatamente al gobernador ó jefe económico para que mande se anuncie desde luego la finca en quiebra. Esta nueva subasta se llevará á efecto sin demora, y solo podrá suspenderse en el caso de que comparezca el rematante antes del acto de la misma acreditando con la carta de pago haber satisfecho el primer plazo. Y al propio tiempo debe el jefe económico participar la declaracion de quiebra al juez, ante quien se celebró la subasta, para que imponga y exija al rematante las responsabilidades á que se refieren los arts. 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 1856, dando igual aviso al promotor fiscal á fin de que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva dicha responsabilidad (1). De la declaracion de quiebra y sus efectos, inclusa la responsabilidad indicada, se tratará en la seccion VI, §. 1.°

Antes de realizar el pago del primer plazo, si la finca consiste en arbolado ó monte, debe el rematante dar fianza, en los casos y forma que se espondrán en la seccion IV, al tratar de las obligaciones de los compradores (2).

Y al verificar dicho pago, debe satisfacer tambien el rematante los derechos devengados por los peritos en la tasacion de la finca rematada, y los del espediente de subasta, y reintegrar además el papel sellado de dicho espediente hasta el acto de la posesion (3). Los derechos de los peritos ingresaban antes en el Tesoro público, por quien eran satisfechos á aquellos; pero en el dia han de percibirlos directamente y de una vez de los compradores, como se dijo en el párrafo 1.° de esta seccion. Los de los espedientes de su-

(1) Dispos. 6.ª á 10 inc. de la Real órden citada de 25 de Enero de 1867.

(2) Real órden de 30 de Octubre de 1862.

(3) Arts. 146, 190, 192, 200, 201 y 202 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, y Real órden de 13 de Marzo de 1856.

hasta se recaudan por los comisionados de ventas de las provincias, conforme á lo prevenido en Real órden de 14 de Octubre de 1855. Y el reintegro del papel sellado, que segun los arts. 200 y 201 de la instruccion de 1855 se verificaba en efectivo, haciendo el pago en la tesorería al satisfacer el primer plazo, hoy debe verificarse con el papel creado para toda clase de reintegros sin escepcion, conforme al art. 65 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, y 2.° del decreto de 18 de Diciembre de 1869. Este papel será presentado por el comprador en la administracion de la provincia, por la cual, puestas en él las notas prevenidas, se entrega la mitad de cada pliego al interesado para que le sirva de carta de pago, y se remite la otra mitad al escribano de la subasta para que la una al espediente (1).

Para verificar el pago del primer plazo debe el comprador recojer del escribano, que autorizó la subasta, el oportuno testimonio del remate y una nota, con el V.° B.° del juez, del importe del papel sellado que deba reintegrar; y además los documentos que acrediten haber realizado el pago de los derechos de los peritos y del espediente de subasta, pues sin la presentacion de estos recibos no se le admitirá el pago de dicho plazo (2). Con todos estos documentos, y el papel sellado de reintegro á los efectos antes indicados, se presentará en la administracion económica de la provincia, la cual en vista de ellos espedirá cargaréme por el importe del primer plazo, para que lo pague en la oficina correspondiente y recoja la carta de pago. El cargaréme y los recibos de los derechos de peritos y espediente se unen al testimonio del remate, y todo se conserva en aquella oficina, para unirlo al espediente matriz, cuando lo entregue el comisionado despues de terminado (3).

Al propio tiempo debe el comprador otorgar y firmar los correspondientes pagarés, estendidos en papel sellado de 2 reales, obligándose á satisfacer en los plazos prevenidos, segun la clase y procedencia de la finca, el precio del remate, cuyos pagarés quedan en la administracion de la provincia para hacerlos efectivos á su respectivo vencimiento (1).

Otorgados dichos pagarés, y estendida la carta de pago del primer plazo, ó la del total importe del remate, si conviniere al comprador pagarlo en el acto con las ventajas que se dirán mas adelante, recojerá éste dicha carta de pago y la presentará al juez de la subasta para los efectos que se espondrán en el párrafo 12 de esta seccion.

Téngase presente, por último, que aunque por regla general el pago debe hacerse en la provincia en que radique la finca, como se ha dicho, tambien puede hacerse en Madrid en todo caso. Cuando así les convenga á los compradores, lo solicitarán de la Direccion general del ramo, la cual debe espedir sus órdenes para ello á la administracion económica de Madrid, y en su vista admitirá esta el pago, prévia presentacion por el interesado del testimonio del remate y adjudicacion, y la nota del importe del papel sellado que deba reintegrarse, como tambien de los recibos que acrediten el pago de los derechos de los peritos y del espediente de subasta. A la vez, la administracion de la provincia respectiva, á la cual habrá hecho presente el interesado su propósito de pagar en Madrid, dará aviso de ello á la de esta provincia, acompañando la demostracion de lo que por cada concepto ha de ingresar en tesorería. Recibido este aviso, y presentados por el comprador los indicados documentos, se le admitirá el pago en la tesorería de Madrid, dándole ingreso como traslacion de caudales, á cuyo fin se espedirán los cargarémes correspondientes, y se practicarán los asientos y demás operaciones de contabilidad, que están prevenidas (2).

(1) Real órden de 13 de Marzo de 1856.
(2) Art. 2.° del decreto de 22 de Diciembre de 1868.
(3) Dicho decreto y arts. 116 y 153 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

(1) Arts. 154 y 155 de dicha instrc.; Real órden de 3 de Setiembre de 1855, y art. 13, número 5.° del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 sobre papel sellado.
(2) Arts. 22 y 203 á 206 inc. de la instrc. de 31 de Mayo de 1855.

§. 11. *Cesion del remate.*

Segun el art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, párrafo 7.° de las atribuciones de los jueces y 5.° de los escribanos, aquellos deben admitir, y estos estender y autorizar las cesiones de las fincas rematadas, que hagan los compradores de bienes nacionales en el acto de firmar el remate, ó en los dos dias siguientes á la notificacion de haberles sido adjudicadas la finca ó fincas. No se determinaron condiciones de ninguna clase para asegurar la responsabilidad del cesionario, y aunque lo lógico y legal hubiera sido exigir de este las mismas garantías que respecto del cedente tenia establecidas la ley, puesto que se constituia en su lugar, y por la cesion adquiria todos los derechos y obligaciones del rematante, es lo cierto que no era uniforme la práctica, y que en muchos casos, de mala fé sin duda, se cedieron fincas á favor de personas insolventes, con notorio perjuicio del Estado.

Para evitar estos abusos y las cuestiones que de ello se originaban sobre la validez de tales cesiones y responsabilidad del cedente, se dictaron varias disposiciones. Primeramente la Direccion general del ramo, en circular de 6 de Julio de 1859, previno á los gobernadores de provincia, que las cesiones solo podian tener lugar, ó en el acto de cerrarse el remate de la finca, ó en los dos dias siguientes á la notificacion de la adjudicacion de esta, como se ordena en la citada instruccion: que en ambos casos debe estenderse en el mismo espediente la oportuna diligencia, firmada por el cedente y por el aceptante, el cual por tanto deberá concurrir al acto; y que aun hecha la cesion en tiempo oportuno, no debian admitirla los jueces si el aceptante no reunia las condiciones de responsabilidad reconocidas en el primer rematante.

Pocos meses despues se mandó con el propio objeto, por Real órden de 18 de Febrero de 1860 (art. 2.°), «que no se admitan cesiones de fincas vendidas por el Estado, sin que antes acredite el cedente tener satisfecho el primer plazo del importe del remate.» Pero esta disposicion era inconciliable con los plazos marcados en la citada instruccion de 1855. Por el art. 145 de la misma se conceden 15 dias para verificar el pago del primer plazo á contar desde la notificacion de la adjudicacion de la finca, y segun el 103, la cesion solo podia hacerse, como hemos dicho, en el acto mismo del remate, ó en los dos dias siguientes á dicha notificacion, lo cual era materialmente imposible, si se habia de llenar dicho requisito de acreditar en este acto el pago del primer plazo. Aun se agravó la dificultad con la declaracion hecha por otra Real órden de 30 de Abril de 1864, de que la de 18 de Febrero de 1860 no derogaba ni alteraba la esencia de lo prevenido en el art. 103 antes citado. La verdad es, como se conoce á primera vista, que sin alterar los plazos en éste marcados, no era posible el cumplimiento de aquella disposicion.

Estas disposiciones inconciliables dieron por resultado, como se consigna en el preámbulo de la Real órden de 3 de Enero de 1868, «que se introdujera por los jueces de las subastas una práctica enteramente arbitraria, porque al paso que unos admitian las cesiones en cualquier tiempo despues de realizado por el cedente el pago del primer plazo, otros solo lo consentian dentro de los dos dias siguientes al de haberse satisfecho.» Por esto se estimó de imprescindible necesidad la adopcion de una medida que alejara todo motivo de confusion y de duda, «señalando un plazo fijo y determinado, en virtud del cual, tanto los compradores como los funcionarios que intervengan en las subastas en representacion del Estado, sepan á qué atenerse.»

Con este objeto y con el de determinar, para evitar cuestiones, las cesiones que habian de tenerse por válidas de las realizadas hasta aquella fecha, se dictó la antedicha Real órden de 3 de Enero de 1868. Segun lo en ella resuelto, deben tenerse por válidas y subsistentes las cesiones consumadas hasta entonces con autorizacion de los jueces de las subastas, considerando en su virtud á los cesionarios como subrogados en los derechos y obligaciones de los cedentes, siempre que en los respectivos espedientes de subasta cons-

ten las diligencias de cesion hechas ante los citados jueces. Y tambien han de considerarse válidas, y con iguales efectos, las cesiones ya verificadas, cuando á virtud de ellas se hayan otorgado por el Estado las escrituras de venta en favor de los cesionarios, cualquiera que sea la época en que se hayan realizado.

Esto en cuanto á las cesiones ya verificadas hasta aquella fecha, quedando así fijados, de una manera equitativa y conveniente, los respectivos derechos de los compradores y del Estado. A la vez se dictaron reglas fijas para lo sucesivo, haciendo conciliables las garantías establecidas á favor de la Hacienda con los términos para verificar el pago del primer plazo. A este fin se reformó el párrafo 7.°, relativo á los jueces, del art. 103 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y se dispuso que en lo sucesivo «los jueces admitirán las cesiones que hicieren los rematantes dentro de los diez dias siguientes al pago del importe del primer plazo, siempre que este pago se haya realizado dentro del término de 15 dias marcado para dicho efecto en el artículo 145 de la propia instruccion.»

De consiguiente, ya no pueden admitirse las cesiones en el acto del remate, ni tampoco sin que el cedente acredite con la carta de pago tener satisfecho el primer plazo; y aun en este caso, no deberá el juez admitir la cesion, si el pago se ha realizado despues de los 15 dias siguientes á la notificacion de la adjudicacion de la finca, ni cuando hayan trascurrido mas de diez dias desde la fecha de dicho pago. Las cesiones hechas fuera de estos plazos no son válidas, ni pueden producir otro efecto que el de un contrato de compra-venta entre particulares, lo propio que cuando hayan sido hechas en contrato particular, y la Hacienda, por tanto, no debe proceder en estos casos contra el cesionario, cuando dejen de pagarse los plazos vencidos; sino que ha de repetir el pago del primitivo comprador, que firmó los pagarés, como se declaró por Real órden de 30 de Abril de 1864, sin perjuicio de su derecho para dirigirse contra la finca, que quedó hipotecada especialmente á dicho pago.

Por la propia Real órden citada de 1868 se impuso á los jueces la obligacion de dar parte á las administraciones económicas respectivas de las cesiones que ante ellos se verifiquen, á fin de que en su vista hagan las oportunas anotaciones en los libros de cuentas corrientes, y subroguen á los cesionarios en las obligaciones de los cedentes. Esto viene á confirmar que, en tales casos, el cedente queda libre de toda responsabilidad, y aunque firmó los pagarés de los plazos, el apremio para hacerlos efectivos ha de dirigirse contra el cesionario subrogado en lugar de aquel para todo, como si hubiese sido el rematante.

Indicaremos, por último, que están permitidas las cesiones de parte de una finca, de suerte que el rematante puede cederla toda ó parte de ella á una ó varias personas, ya en conjunto, ya en porciones determinadas. Los jueces, por tanto, deben admitir estas cesiones, siempre que se verifiquen pagado el primer plazo y dentro de los términos antes indicados; pero entendiéndose con la condicion espresa de que todas las porciones en que se haya subdividido la finca responderán mancomunadamente á la Hacienda, como hipoteca del total valor en que fué rematada la propiedad sin dividir (1).

§. 12. *Posesion al comprador, y sus efectos.*

Verificado el pago del primer plazo, y otorgados los pagarés de los restantes, en la forma espuesta en el párrafo 10 de esta seccion, debe ponerse al comprador en posesion de la finca. Si éste hubiere hecho la cesion del remate en los plazos y forma espresados en el párrafo anterior, se dará la posesion al cesionario, á quien han sido trasmitidos todos los derechos y obligaciones del cedente.

La toma de posesion puede ser gubernativa ó judicial, segun convenga á los compradores; pero en ambos casos debe decretarse por el juez de la subasta. A este fin el interesado acudirá á dicho juez presentando, como requisito indispensable, la carta de pago del

(1) Real órden de 14 de Junio de 1864.

primer plazo: en su vista, y resultando además estar hecho el reintegro del papel sellado, se proveerá auto mandando que se una aquella al espediente y se le ponga en posesion. Si solicita que esta sea judicial, se la dará el propio juez con el escribano de la subasta, bien por sí mismo, ó bien dando comision al juez de paz del lugar donde radique la finca. Y si hubiere solicitado que sea gubernativa, el juez oficiará al comisionado de ventas, principal ó subalterno, en cuyo distrito esté aquella situada, para que por èste funcionario se lleve á efecto dicho acto. Los comisionados pueden delegar estas facultades en los jueces de paz y alcaldes de los pueblos respectivos. La posesion se confiere en la forma acostumbrada, requiriendo á los colonos ó llevadores de las fincas para que reconozcan por dueño al comprador (1).

Con la toma de posesion, queda consumado el contrato de compra-venta, pues en su virtud se entrega la cosa al comprador, el cual debe haber pagado el precio préviamente, y en su caso asegurado el pago de los plazos restantes con los correspondientes pagarés y la responsabilidad hipotecaria á que queda afecta la finca. Desde aquel acto ha de considerársele, por tanto, como dueño para determinar sus derechos sobre la finca y para los demás efectos legales. Sin embargo, no siempre se toma la posesion como punto de partida para estos efectos. Unas veces se parte de la adjudicacion, como se hizo en el Real decreto de 10 de Julio de 1865 para fijar el plazo de seis meses, dentro de los cuales deben incoarse las reclamaciones gubernativas á que se refiere el art. 173 de la instruccion de 1855; otras del pago del primer plazo, desde cuya fecha el comprador hace suyos los frutos de la finca (2); y otras del acto de la posesion, como se espondrá mas estensamente en la seccion IV, al tratar de los derechos y obligaciones de los compradores.

Conviene, no obstante, dejar aquí consignado, sin perjuicio de ampliarlo en dicho lugar, que en el acto de la posesion, ó en los quince dias siguientes, que se fijan como término improrogable, deben reclamarse los desperfectos ocurridos en las fincas despues de tasadas, y antes de que tome posesion de ellas el comprador, como igualmente la falta de cabida ó de arbolado, ó cualquiera otra indemnizacion que corresponda. Si el comprador dejare de tomar la posesion en el término de un mes, á contar desde el dia en que verificó el pago del primer plazo, será considerado como poseedor para dichos efectos, y perderá su derecho á las indicadas reclamaciones si no las entabla dentro de los 15 dias siguientes al vencimiento del mes espresado (1).

Téngase presente, por último, que una vez puesto el comprador de fincas del Estado en quieta y pacífica posesion de lo vendido, cesa la competencia de la Administracion para entender de las cuestiones que se susciten con motivo de actos posesorios de aquel, posteriores á la subasta, é independientes de ella (2).

§. 13. *Escritura de venta y su registro.*

En el artículo **COMPRA-VENTA** por derecho comun (3) se espuso que aunque este contrato, como esencialmente consensual, se perfecciona por el consentimiento de las partes y se consuma con la entrega de la cosa y pago del precio, en el estado actual de nuestra legislacion es una consecuencia indeclinable de él el otorgamiento de escritura pública. Partiendo de estos principios las disposiciones relativas á la venta de bienes nacionales, dan por supuesto dicho otorgamiento de escritura, y para ello dictan algunas reglas, que vamos á esponer; pero sin atribuir á este acto efectos especiales. Para mayor

(1) Arts. 156 y 202 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855; Real órden de 13 de Febrero de 1862, y art. 7.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865.
(2) Art. 158 de la citada instrc. de 1855.

(1) Art. 157 de la citada instrc.; Real órden de 24 de Diciembre de 1862, y art. 7.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865.
(2) Decisiones del Consejo de estado en cuestiones de competencia de 2 de Mayo y 14 de Octubre de 1866, y otras.
(3) Véase el §. 7.° de la sec. III de dicho artículo, pág. 540 del tomo XI.

claridad espondremos con separacion lo relativo al acto del otorgamiento, espresando la autoridad que debe hacerlo á nombre del Estado; forma en que han de estenderse estas escrituras; derechos de los jueces y notarios; registro é inscripcion de las mismas, y plazo en que han de otorgarse, con las medidas coercitivas para obligar á ello á los compradores.

Otorgamiento. Corresponde al juez de la subasta otorgar á nombre del Estado la escritura de venta, debiendo verificarlo ante el escribano que entendió en la misma subasta, si fuere notario á la vez; y no siéndolo, ante el notario designado por la Hacienda, como se dijo en la seccion 2.ª al reseñar las atribuciones de los jueces y escribanos. Dichos funcionarios deben ser, por regla general, los que intervinieron en la doble ó triple subasta en que se hizo la postura mayor, y de consiguiente ante quienes se verificó el remate de la finca. Sin embargo, los compradores pueden elegir el juzgado que más les convenga. Para ello, dentro de las 48 horas siguientes á la notificacion de la adjudicacion de la finca debe manifestar el comprador ante qué juez, de los que hayan presidido la doble ó triple subasta, desea se le otorgue la escritura de venta, y no haciendo esta designacion, se otorgará por el juez en cuyo estrado se hizo la postura mayor. Este remitirá en aquel caso el espediente al juez designado por el interesado, poniéndolo en conocimiento del jefe económico de la provincia en que radique la finca, á fin de que pueda reclamarse para archivarlo, ó hacerse el cargo que corresponda, en caso de demora ó estravío (1).

Forma de estas escrituras: modelos impresos. Segun la instruccion de 31 de Mayo de 1855, estas escrituras debian otorgarse en los ejemplares impresos, aprobados por la Junta superior de ventas, que se facilitaban para ello á los notarios que han de autorizarlas. Contienen todas las cláusulas propias de estos contratos, y los blancos ó huecos necesarios para poner manuscrito el nombre del comprador ó compradores, la descripcion de la finca ó fincas, con sus cargas, si las tuviere, y las demás circunstancias especiales. Está encargado se haga en ellas mencion espresa de quedar hipotecadas la finca ó fincas al pago de las obligaciones del comprador, ó sea al pago de los plazos ó parte del precio del remate que no haya satisfecho al contado, y al de las demás cargas que hayan quedado de cuenta del mismo (1).

Pueden comprenderse en una misma escritura dos ó mas fincas, siempre que sean de igual procedencia, esto es, que todas hayan pertenecido al clero, ó á beneficencia, ó á propios, etc., y que hayan sido rematadas ó cedidas á favor de una misma persona. Y lo propio ha de entenderse respecto de los censos (2).

La impresion de dichas escrituras estaba hecha en papel comun; pero los notarios que las autorizaban debian cuidar, bajo su responsabilidad personal, de agregar al original y á la copia el papel de reintegro correspondiente, conforme á lo prevenido en el Real decreto de 12 de setiembre de 1861 sobre papel sellado. Tambien está encargado á los jueces de primera instancia que no autoricen aquellas sin que se haya llenado préviamente este requisito, á fin de evitar por este medio la defraudacion de la renta (3).

Como los modelos para las escrituras de que se trata se redactaron é imprimieron antes de las leyes hipotecaria y del notariado, no contienen algunas de las circunstancias que estas exigen para la inscripcion en el registro de la propiedad. Fundado en esto, el escribano de Hacienda de Gerona solicitó autorizacion para prescindir de los indicados impresos cuando no puedan consignarse en ellos todas las circunstancias exigidas por dichas leyes, y percibir en este caso los derechos marcados en el arancel del notariado. Esta pretension fué desestimada por el Ministro de Hacienda en Real órden de 17 de Febrero de 1866, disponiéndose que los nota-

(1) Real órden de 14 de Enero de 1856.

(1) Art. 167 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855.

(2) Art. 199 de id., y 3.º de la Real órden de 15 de Enero de 1856.

(3) Real órden de 25 de Setiembre de 1855.

rios se ajusten en el otorgamiento de estas escrituras á los modelos impresos que se les tienen facilitados, autorizándolos, en aquellos casos en que no puedan insertar todo el contesto en los impresos actuales, á que manuscriban algun pliego adicional, exigiendo por este el aumento de gasto que cause únicamente el trabajo de amanuense. Se fundó esta Real órden en que los modelos impresos estaban ajustados á las necesidades de dichas leyes, siendo suficientes en la mayor parte de los casos, y en que la autorizacion solicitada por el escribano de Hacienda de Gerona daria lugar á abusos lamentables en la redaccion de las escrituras, que serian demasiado estensas, y en la exaccion de derechos.

Sin embargo, por dos órdenes del Poder ejecutivo de 22 de Marzo y 26 de Abril de 1869, comunicadas por el Ministerio de Gracia y Justicia, la primera al regente de la Audiencia de Barcelona y la segunda al decano del colegio notarial de Valencia, de aplicacion general, segun su contesto, aunque no se han publicado en la *Gaceta* ni en la *Coleccion legislativa*, se han dictado disposiciones contrarias á la anteriormente espuesta. Se declara en ellas, que en las escrituras de bienes nacionales deben ajustarse los notarios á la ley del notariado y al reglamento para su ejecucion, «sin acogerse á resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda sobre notariado, en cuyo ramo la competencia única y esclusiva es de la secretaría de Gracia y Justicia:» que es improcedente, segun las prescripciones de dicha ley y de su reglamento, la protocolizacion de toda clase de impresos, debiendo estenderse las escrituras matrices manuscritas y con las demás condiciones legales, percibiendo los notarios los derechos de arancel; y que todos los notarios pueden intervenir en los contratos en que tenga interés la Hacienda, sin perjuicio de que esta elija al que estime conveniente de entre los colegiados. Con estas disposiciones quedaron autorizados los dos hechos, que a Real órden antes citada de 17 de Febrero de 1866 calificó de abusos lamentables.

El principal de ellos consiste en la percepcion de los derechos señalados en el arancel, y sin embargo esto es lo justo, en el supuesto de que parte el Ministerio de Gracia y Justicia, de que los notarios deben redactar y estender manuscritas todas las escrituras; pero no es lo conveniente, porque contraría el fin económico de facilitar las ventas de los bienes desamortizados. Con este objeto se señalaron á los jueces y notarios por el otorgamiento de dichas escrituras unos derechos sumamente módicos, y como los de los notarios no bastarian en muchos casos para el pago del escribiente, se adoptó el medio antes indicado de facilitarles los modelos impresos para la matriz y la copia, á fin de que no les fuese gravoso este servicio. Hoy no pueden utilizar estos impresos, segun las declaraciones antes relatadas; pero tampoco pueden percibir los derechos de arancel, como luego veremos, teniendo que sufrir los notarios el gravámen consiguiente. Si se cree conveniente no gravar á los compradores con los derechos de arancel por las escrituras, tambien es justo que los notarios sean retribuidos en proporcion á su trabajo. Fácil seria conciliar ambos estremos restableciendo los modelos impresos, redactados de nuevo conforme á la legislacion vigente.

Derechos. Veamos ahora los derechos que deben pagar los compradores de bienes nacionales á los jueces y notarios por el otorgamiento de la escritura de venta. Los artículos 197, 198 y 199 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 los fijaron en 10 reales al juez y 20 al notario por original y copia: cuando se comprendan mas de diez fincas en una escritura, 1 real mas al primero y 2 al segundo por cada diez de esceso; y la mitad de aquellos derechos, cuando el valor de la finca ó fincas no esceda de 10,000 reales. Despues, por Real órden de 15 de Enero de 1856 se modificaron estas disposiciones, estableciéndose una tarifa gradual y proporcionada al valor de las fincas ó censos, cuyo mínimum es de 4 y 8 reales, y el máximum de 10 y 20 respectivamente, debiendo otorgarse gratis la escritura cuando el valor de la cosa no esceda de 100 reales. Véase dicha Real órden en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*. Téngase presente que tratamos de las escrituras

de venta: para las de redencion de censos se fijó una nueva tarifa por decreto de 22 de Diciembre de 1868.

Por la órden del Poder ejecutivo, ya antes citada, de 26 de Abril de 1869, se declaró que los notarios podian percibir por estas escrituras los derechos taxativamente señalados en el arancel, mediante á que debian estenderlas manuscritas, y no en los modelos impresos. Pero últimamente, por el artículo 10 de los aranceles notariales, aprobados por la ley de 11 de Junio de 1870, se ha dispuesto que las escrituras de ventas de propiedades y derechos del Estado se cobrarán, por ahora, con arreglo á lo dispuesto en la instruccion de 31 de Mayo de 1855. Como la Real órden de 15 de Enero de 1856 sustituyó en esta parte á dicha instruccion, parece que la tarifa por ella establecida es la que debiera observarse en el dia. Sin embargo, como la cita ó referencia se concreta solamente á la instruccion de 1855, en rigor deberán exigirse los derechos fijados por esta en sus artículos 197 y 198, espuestos anteriormente, mientras no se disponga otra cosa para conciliar los intereses del Estado y de los compradores con los de los notarios.

Registro é inscripcion. Otorgada la escritura de venta, debe el comprador presentar la copia en la administracion económica de la provincia, para que se tome razon de ella en el registro de fincas que se lleva en dicha oficina, á fin de que conste su salida; y además en el registro de la propiedad del partido para su inscripcion, conforme á lo prevenido en la Ley Hipotecaria. Por esta inscripcion no se satisfacen otros derechos que los del registrador, pues estos bienes están esceptuados del impuesto hipotecario, no solo en la enajenacion hecha por el Estado; sino en todas las traslaciones de dominio de los mismos que tengan lugar durante los cinco años siguientes al dia de su adjudicacion (1).

Como desde que empezó á regir la Ley Hipotecaria de 1860, no puede hacerse inscripcion alguna en el registro de la propiedad sin que se halle inscrito anteriormente el dominio ó derecho de que se trate á favor de la persona que lo trasfiera ó grave, no era posible inscribir en la mayor parte de los casos las enajenaciones de bienes nacionales, por la circunstancia de no hallarse inscrito el dominio, ó derecho real enajenado, á favor del Estado ó de la corporacion de quien procedia la finca ó censo. Para salvar esta dificultad se dictaron varias disposiciones por Reales decretos de 19 de Junio y 6 de Noviembre de 1863, dando reglas para la inscripcion de los bienes inmuebles y derechos reales que poseian ó administraban el Estado y las corporaciones civiles y eclesiásticas. Todavía se ofrecieron en la práctica inconvenientes y dificultades, y para obviarlas se dictó últimamente por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el de Hacienda, el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.

Segun este decreto, los bienes inmuebles y derechos reales esceptuados de la desamortizacion debieron inscribirse desde luego; y los que hayan de enajenarse, se inscribirán cuando llegue el caso de su venta ó de la redencion de los censos á favor de particulares, aunque antes se trasfiera al Estado la propiedad de ellos, como sucede con los de corporaciones eclesiásticas por consecuencia de la permutacion acordada con la Santa Sede. En ambos casos, la inscripcion en el registro de la propiedad será de dominio, ó de posesion, á favor del Estado, si éste poseyere los bienes como propios; ó á favor de la corporacion que los posea ó los hubiere poseido hasta que la Hacienda pública los tomó bajo su custodia. Será aquella de dominio, cuando exista título escrito de la propiedad, el cual deberá presentarse en el registro respectivo; y de posesion, cuando no exista dicho título. La inscripcion se llevará á efecto en este último caso en virtud de una certificacion que debe librar por duplicado el administrador económico ó jefe á cuyo cargo esté la finca, con referencia á los inventarios ó á los documentos oficiales que obren en su poder, haciendo constar en ella los particulares que se espresan en el artículo 8.° de dicho decreto.

Cuando haya de ponerse en venta alguno

(1) Arts. 24 de la ley de 1.° de Mayo de 1855; 169 y 175 de la instrc. de 31 de id.

de los bienes, el administrador de la provincia hará buscar y unir al espediente de venta los títulos de propiedad, disponiendo se inscriban en el registro, si ya no lo estuviesen; y cuando no existan ó no sean hallados dichos títulos, se hará así constar en el espediente, y librará aquel por duplicado la certificacion antes indicada, á fin de que en su vista se estienda la inscripcion de posesion. Todo esto debe ejecutarse antes del dia señalado para el remate. Para hacer la presentacion de los títulos ó certificaciones en el registro de la propiedad respectivo, pueden valerse los jefes económicos de las personas interesadas en la adquisicion de los bienes; y no estimando conveniente este conducto, los remitirán á cualquiera de sus subalternos que resida en el lugar del registro, y en su defecto al promotor fiscal del juzgado (1).

Hecha la inscripcion del dominio ó posesion, ya no existe inconveniente para verificar la de la escritura de venta. Con este objeto, al otorgarse dicha escritura, deben entregarse al comprador los títulos de propiedad de la finca, si los hubiese, y en su defecto el duplicado de la certificacion de posesion, que habrá devuelto el registrador de la propiedad. Así lo dispone el art. 16 del citado decreto, modificando lo que sobre este punto estaba prevenido por el 176 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y el acuerdo de la Junta superior de ventas de 1.° de Febrero de 1856, circulado por la Direccion en 5 del mismo mes, pues segun estas disposiciones no debian entregarse los títulos de propiedad al comprador hasta que hubiera satisfecho por completo el precio del remate: hoy han de entregársele con la escritura de venta, á cuyo fin se habrán unido anteriormente al espediente, como se ha dicho.

Para mas pormenores sobre esta materia, véase en la seccion 1.ª de la *parte legislativa* el citado Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, en el que se dan reglas circunstanciadas para la inscripcion en el registro de la propiedad de los bienes de que se trata.

Y no solo se dictaron para la inscripcion de los bienes nacionales, que se vendieran desde aquella fecha; sino tambien para la de los vendidos anteriormente. Para inscribir los enajenados antes del dia 1.° de Enero de 1863, en que empezó á regir la Ley Hipotecaria, basta la presentacion de la escritura de venta otorgada á nombre del Estado, pues en este caso se hace la inscripcion desde luego á favor del comprador; pero los vendidos desde dicho dia no pueden inscribirse sin que se halle inscrito anteriormente el dominio ó derecho del vendedor. Para hacer esta inscripcion puede el comprador exigir que se le entreguen los títulos de propiedad, y en su defecto la certificacion de posesion (1).

En este último caso el comprador debe satisfacer los honorarios del registrador por la inscripcion del dominio ó posesion á favor del Estado ó de la corporacion á quien perteneció la finca: en el primero, debe abonarlos el Estado; pero incluyendo su importe en los gastos del espediente de subasta, para reintegrarse de ellos, pagándolos tambien el comprador (2).

Plazo y medidas coercitivas para el otorgamiento. Por no haberse dictado ninguna disposicion coercitiva para el otorgamiento de las escrituras de venta, ni haber atribuido efecto alguno á este acto, muchos compradores, creyendo sin duda asegurados sus derechos con la posesion y las cartas de pago del precio del remate, y con hallarse consignada la venta en el espediente de subasta, escusaban dicho otorgamiento, y hasta se creian con derecho para resistirlo. A fin de evitar la perturbacion é inconvenientes que de ello se seguian para el Estado, y aun tambien para los mismos interesados, se ha dictado la órden del Regente del reino de 24 de Abril de 1870.

Por esta órden se declara obligatorio para los compradores de bienes nacionales el otorgamiento de la correspondiente escritura de venta: se fija el plazo de tres meses para otorgarla, á contar desde la publicacion de la

(1) Real órden de 16 de Agosto de 1866.

(1) Arts. 18 y 19 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.

(2) Art. 17 de id.

misma órden respecto de los que hasta ahora no hayan cumplido con este requisito, y desde el dia en que verifiquen el pago del primer plazo del remate para los que en lo sucesivo adquieran bienes nacionales; y se manda, por último, que finalizado el plazo indicado, proceda la Administracion á exigir el cumplimiento por la vía de apremio contra todos aquellos que lo hubieren resistido.

Estas disposiciones van precedidas de *ocho considerandos*, que pueden verse en la propia órden (seccion 1.ª de la *parte legislativa*). Si bien aquellas son claras y terminantes, y están además ajustadas á la jurisprudencia establecida, en algunos de estos se sientan principios y doctrinas, poco conformes con dicha jurisprudencia, y que pueden dar lugar á dudas y cuestiones trascendentales. Se consigna en el 4.º, «que siendo el contrato de compra-venta de bienes nacionales de los que exijen el otorgamiento de escritura, *es necesaria ésta para que se considere perfecto*, con arreglo á las disposiciones de la ley de Partida.» Y se añade en el 7.º: «que siendo el contrato de compra-venta obligatorio para las dos partes que concurren á celebrarlo, cualquiera de ellas tiene espedito derecho para obligar á la otra á *perfeccionarlo por medio de la correspondiente escritura*.» Si prevaleciera esta doctrina, seria necesario modificar la legislacion vigente sobre la materia, que no atribuye al otorgamiento de la escritura el importante efecto de perfeccionar el contrato. Este, como esencialmente consensual, queda perfeccionado con el consentimiento de las partes. El comprador espresa el suyo al hacer la postura en el acto de la subasta y aceptar el remate; y el vendedor al prestar su aprobacion á este acto y acordar la adjudicacion de la finca por medio de la Junta superior de ventas, que es la facultada para ello. Luego que recae esta aprobacion, queda perfeccionado el contrato (1), y están obligadas ambas partes á su cumplimiento, el que no podria exigirse mientras no se otorgara la escritura, si dependiera de esta circunstancia la perfeccion de aquel.

La escritura de venta no es mas que la prueba del contrato (1); no es por tanto un requisito esencial para su validez, por mas que sea una consecuencia del mismo, segun el estado actual de nuestra legislacion, como hemos indicado al principio de este párrafo, con referencia al artículo COMPRA-VENTA por derecho comun. Solo en el caso de la ley 6.ª, tít. 5.º, Part. 5.ª, esto es, cuando las partes lo hayan pactado espresamente, dependerá la perfeccion de la venta del otorgamiento de la escritura; pero como en las de bienes nacionales no existe ese convenio ó pacto espreso, no puede suponerse, como se supone en los considerandos de la órden de que se trata, que dependa de dicha circunstancia la perfeccion del contrato.

Ni habia necesidad de sentar esa doctrina, errónea y perjudicial á los intereses del Estado, para mandar lo que se dispone en dicha órden. Corresponde á la Administracion activa cuidar del cumplimiento de los contratos de venta de bienes nacionales y sus consecuencias, y consecuencia de los mismos es el otorgamiento de la escritura. Por esto, y por el interés que tiene la Hacienda de que conste registrada y asegurada la hipoteca especial que tiene sobre la finca vendida para el cobro

(1) El Consejo de Estado ha aplicado esta doctrina, que es tambien de derecho comun, en la resolucion de las cuestiones sometidas á su fallo en la vía contenciosa. En el decreto-sentencia de 6 de Noviembre de 1863 (*núm. 233 de la Coleccion legislativa de dicho año*) se dice lo siguiente: «Considerando que el contrato de venta de bienes nacionales no se perfecciona sin que recaiga la aprobacion de la Junta superior de ventas.» En otro de 9 de Enero de 1865 se lee lo que sigue: «Considerando que al anunciarse la subasta de unos bienes, reservándose absolutamente y sin limitacion una de las partes la facultad de aprobarla, no puede suponerse prestado el consentimiento mientras no recae aquella aprobacion, *ni se perfecciona por consiguiente el contrato*, ni adquieren los licitadores un derecho perfecto é irrevocable á que se les adjudiquen los bienes subastados.» En otro de 4 de Marzo de 1868: «Considerando que, segun las disposiciones vigentes, la adjudicacion es lo que dá el derecho á los compradores y liga á la Administracion.» Siempre se dá por supuesto que el contrato queda perfecto con la aprobacion de la Junta superior de ventas, sin que en ningun caso se haga depender esta circunstancia del otorgamiento de la escritura.

(1) Así lo tiene declarado el Consejo de Estado en el Real decreto-sentencia de 31 de Enero de 1868.

del precio en los plazos establecidos, puede obligar al comprador al otorgamiento de la escritura de venta, y en tal concepto es legal y procedente la parte dispositiva de la órden de que se trata; pero sin que pueda aceptarse, por carecer de estas condiciones, la doctrina sentada en los considerandos de la misma sobre el punto indicado. ¿Puede convenir al Estado, por regla general, que quede sin efecto la venta, si el comprador se niega á otorgar la escritura? Pues esta seria la consecuencia legal, conforme á la ley de Partida, si dependiera de ese acto la perfeccion del contrato. Sin embargo, en la parte dispositiva de la órden no se le atribuye ese efecto; sino que, dando por supuesto que el contrato quedó perfeccionado, y hasta consumado con el pago del primer plazo y la entrega de la cosa al comprador, se señala á éste el plazo de tres meses, á contar desde dicho pago, para el otorgamiento de la escritura.

§. 14. *Derechos de los espedientes de subasta.*

Los jueces, escribanos y pregoneros, que intervienen en las subastas de bienes nacionales, tienen asignados derechos por la práctica de todas estas diligencias. Esos derechos, proporcionados á la cuantía de las fincas, son fijos para cada espediente de subasta, incluso el testimonio para verificar el primer pago, sin poderse aumentar aunque se hayan practicado diligencias estraordinarias, ó dos ó mas subastas por falta de postor. El art. 192 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 contiene la tarifa gradual de los que debe percibir cada uno de dichos funcionarios, con el aumento de una cuarta parte, cuando las fincas radiquen en la provincia de Madrid. Véase dicha tarifa en la *parte legislativa*. Principia por las fincas de 2,001 reales y concluye por las de un millon en adelante. Cuando no pase de 2,000 rs. el valor de la finca, las actuaciones se considerarán de oficio, y no devengarán derecho alguno. Para este efecto ha de atenderse al valor que obtenga la finca en el remate; y al de su tasacion ó capitalizacion, cuando hayan de graduarse y percibirse los derechos conforme á la indicada tarifa (1).

Los derechos de que se trata han de satisfacerse por el comprador al verificar el pago del primer plazo, como se espuso en el párrafo 10.° de esta seccion. No tienen aumento por la doble ó triple subasta, de suerte que el rematante siempre paga por este concepto la cantidad designada por la tarifa, y lo que corresponde respectivamente á los jueces, escribanos y pregoneros, se distribuye por partes iguales entre todos los que intervinieron en las subastas simultáneas de la finca rematada (2).

En vista de las dificultades que ofrecia la recaudacion de estos derechos para los jueces, escribanos y pregoneros, que intervienen en las triples subastas que se celebran en Madrid, se dispuso que sean cobrados por los comisionados principales de ventas de las provincias, y que las cantidades que produzcan, deducido el 3 por 100 por premio de recaudacion, las tengan á la órden del comisionado de la provincia de Madrid, el cual, prévio avenimiento con los partícipes, dispondrá la traslacion de fondos y su reparto (3).

Además de los espresados derechos, deben pagar tambien los compradores los de la escritura de venta, y los correspondientes á los peritos por la tasacion de la finca, en la forma que se espuso en los párrafos 1.°, 10 y 13 de esta seccion.

SECCION IV.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS COMPRADORES DE BIENES NACIONALES.

De todo contrato nacen derechos y obligaciones recíprocas para los contratantes: los derechos de una parte se convierten, por regla general, en obligaciones para la otra. Lo propio sucede en la compra-venta de bienes nacionales. Los compradores tienen obliga-

(1) Arts. 192, 193 y 196 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855; y Reales órdenes de 13 de Julio de id., y 18 de Mayo de 1863.
(2) Arts. 194 y 195 de dicha instruccion.
(3) Real órden de 14 de Octubre de 1855.

ciones especiales que cumplir, exigibles por el Estado, que es el vendedor, y á cuyo favor se hallan constituidas: representan por tanto, derechos para éste. A su vez contrae igualmente el Estado obligaciones especiales, que son derechos para el comprador. Por esta razon, al esponer aquí las obligaciones y derechos de los compradores, se comprenden tambien necesariamente los derechos y obligaciones del Estado, y no hay necesidad, por consiguiente, de dedicar á estos una seccion especial.

Al tratar en la presente de los indicados derechos y obligaciones, nos limitamos á los que nacen *especialmente* del contrato de que se trata. Le son tambien aplicables los que se derivan de la compra-venta por derecho comun, en cuanto no hayan sido modificados por las disposiciones especiales (1); pero como ya se trató de ellos en su lugar correspondiente, allí podrán consultarse. Véase en el tomo anterior el artículo **COMPRA-VENTA**.

En cuanto al término para ejercitar esos derechos, no hay establecida ni podia establecerse una regla general. Las obligaciones, que les son correlativas, nacen, unas del acto del remate, y otras del pago del primer plazo, de la adjudicacion, ó de la posesion de la finca: unas son exigibles desde luego, y otras dentro de un plazo determinado, segun la índole del caso. Por esto debemos reservar la indicacion de esa circunstancia para cada caso particular, como se espondrá en los dos párrafos que siguen.

§. 1.° *Obligaciones del comprador.*

La primera obligacion que contrae todo el que se presenta á hacer postura en una subasta de bienes nacionales, lo propio que en toda subasta pública, es la de cumplir las condiciones bajo las cuales ha sido anunciada, pues por aquel solo hecho se entiende que las acepta, y se obliga á su cumplimiento para el caso de quedar la finca rematada á su favor. Llegado este caso, el rematante queda constituido en comprador, y debe cumplir las obligaciones que ha contraido en tal concepto, exigibles unas desde el acto del remate, y otras luego que recae la aprobacion superior, y queda en su virtud perfecto el contrato. Estas obligaciones se hallan consignadas en las leyes y disposiciones especiales que tratan de la materia, por cuya razon deben cumplirse aunque no se hayan espresado en las condiciones de la subasta. Son las siguientes:

1.° Identificar su persona en el acto del remate, luego que resulte haber sido el mejor postor. El modo y forma de hacerlo, su objeto y los efectos que produce la omision ó falta de este requisito, quedan espuestos estensamente en el párrafo 6.° de la seccion anterior.

2.° Pagar el precio del remate en los plazos y forma espresados en las condiciones 4.° y 5.° de las subastas, que se insertaron en el párrafo 5.° de la propia seccion III, segun la procedencia y cuantía de los bienes, y otorgar los correspondientes pagarés por los plazos no satisfechos en el acto, como se indicó en el párrafo 10 de la misma seccion. Es de tal importancia esta materia, que merece una seccion especial: en la siguiente la espondremos con la estension conveniente. Téngase presente que el pago del primer plazo ha de verificarse en los 15 dias siguientes á la notificacion de la adjudicacion de la finca.

3.° Pagar los derechos de los peritos por la tasacion de la finca, y los del espediente de subasta, con reintegro del papel sellado, segun se espuso tambien en los párrafos 1.°, 10 y 14 de la seccion anterior.

4.° Recibir la finca comprada por la cabida y linderos, y con las cargas y gravámenes, espresados en los anuncios para la subasta, sobre lo cual véase la seccion IX, tomando posesion de ella dentro del mes siguiente al dia en que hubiere verificado el pago del primer plazo. Si deja trascurrir dicho término sin pedirla es reputado como poseedor para todos los efectos legales de este acto, segun se espuso en el párrafo 12 de la seccion pre-

(1) «Las disposiciones del derecho comun, relativas al contrato de ventas, no tienen aplicacion á las de bienes nacionales sino en defecto de las especiales á que espresamente están subordinadas.» (*Considerando 8.° del decreto-sentencia del Consejo de Estado de 10 de Octubre de 1868*, en pleito promovido por D. Cárlos Lopez Navarro.)

cedente. Esta obligacion es á la vez un derecho para el comprador, pues lo tiene á que el Estado le entregue la finca rematada á su favor, como se dirá en el párrafo 2.° de la presente seccion.

5.° Otorgar la escritura de compra dentro de tres meses, á contar desde el dia en que verificó el pago del primer plazo, y pagar sus derechos, como se dijo en el párrafo 15 de la propia seccion III. Tambien esta obligacion es á su vez un derecho para el comprador, pues puede exigir que se le otorgue la escritura de venta.

6.° No demoler ni derribar las fincas urbanas, sino despues de haber afianzado ó pagado el precio total del remate (1). A primera vista se comprende el objeto de esta disposicion. Ni aun ofreciendo volver á edificar puede permitirse la demolicion del edificio sin que se haya afianzado ó pagado el precio total, porque de otro modo se espondria la Hacienda á perder la garantía que tiene para el cobro. Está encargado á las justicias ó alcaldes de los pueblos que no permitan la demolicion de ningun edificio vendido por la nacion, sino en el caso de que los compradores acrediten tener satisfecha la totalidad del precio del remate, ó asegurado el pago de los plazos que resten, á satisfaccion de los administradores respectivos (2).

7.° Prestar fianza por el valor que resulte tener el arbolado ó monte, cuando la finca sea de esta clase, y dicho valor esceda del importe del primer plazo de la adjudicacion que debe realizarse al contado (3). Tiene por objeto esta disposicion, lo propio que la anterior, poner á salvo los intereses del Estado contra los abusos que pudieran cometer los compradores talando el monte ó arrancando los árboles, que acaso constituyan el principal ó único valor de la finca, antes de haber pagado el precio de la misma.

Debe prestarse dicha fianza siempre que los arbolados ó montes comprados á la nacion se compongan de encinas, pinos, robles, alcornoques, hayas y demás, cuyos frutos y aprovechamientos principales consisten en el valor material de la madera, leña ó carbon, que puede utilizarse de una vez talándolos por completo; pero no cuando sean de olivos y demás árboles frutales. Estos están esceptuados de la fianza, en consideracion á que su utilidad principal y casi esclusiva consiste en su fruto, y el comprador por tanto tiene interés en la mejor y mas duradera conservacion de los mismos. Sin embargo, los compradores contraen el compromiso de no descuajarlos ni cortarlos de una manera inconveniente, mientras no tengan pagados todos los plazos, y los administradores económicos de las provincias tienen el derecho de ordenar y hacer llevar á efecto la suspension de todo descuaje ó corta de dicha clase que se les denuncie, hasta que esté realizado el pago total del precio de la finca, cuyo compromiso debe consignarse en los anuncios de las subastas de fincas de esta clase (1).

Los compradores deben prestar la fianza de que se trata, en los casos en que procede, antes de realizar el pago del primer plazo. Para determinar su cuantía, debe prorratearse entre el valor del arbolado y el del suelo el total importe del remate, segun el que hayan tenido respectivamente en tasacion, y lo que resulte corresponder al arbolado será la cuantía de la fianza. Esta se entiende en todo caso sin perjuicio de quedar responsable la finca al completo pago del precio en que haya sido rematada (2).

Corresponde al juez de la subasta en que se haya presentado el mejor postor, ante el escribano actuario de la misma, disponer las diligencias necesarias para la prestacion de dicha fianza y determinar su cuantía, acordándolas y autorizándolas por sí mismo cuando la finca radique en el pueblo de su residencia, y dando comision al juez de paz ó de primera instancia respectivo, si se hallan en

(1) Art. 178 de la intruccion de 31 de Mayo de 1855.
(2) Real órden de 10 de Diciembre de 1843.
(3) Art. 147 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, modificado por la Real órden de 30 de Octubre de 1862.

(1) Real órden de 23 de Diciembre de 1867.
(2) Art. 147 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, modificado por la Real órden de 30 de Octubre de 1862 ya citada.

otro diferente; lo cual no se opone á que la escritura de fianza se otorgue ante el escribano de Hacienda, como luego veremos. Así está declarado por Real órden de 27 de Mayo de 1863, y era lo procedente cuando correspondía al juez de la subasta acordar la notificacion de la adjudicacion y demás diligencias hasta que el comprador realizaba el pago del primer plazo y era puesto en posesion de la finca; pero desde que por Real órden de 25 de Enero de 1867 se encargaron esas diligencias á la Administracion activa, como se espuso en el párrafo 10 de la seccion anterior, parecia lo procedente que se hubieran encargado tambien á la misma las relativas á la fianza de arbolados. Sin embargo, sobre este punto no se ha hecho novedad, y seguirán por tanto conociendo de ellas los jueces de la subasta.

Las fianzas de que se trata pueden ser *hipotecarias* ó en *efectos públicos*. Las *hipotecarias* han de consistir en otras fincas diferentes de la comprada al Estado, que con rebaja de la tercera parte de su valor en tasacion cubran el del arbolado. Dicha tasacion, aunque nada se dice espresamente sobre ello, deberá practicarse en la forma prevenida para las demás fianzas de igual clase á favor de la Hacienda, por peritos abonados con tres testigos de responsabilidad, practicándose las diligencias ante el juez de la subasta, como se ha dicho, el cual deberá autorizarlas con su aprobacion. Hecho esto y estimada como suficiente la hipoteca, con presencia de estas diligencias y del testimonio de remate se otorgará por el comprador, y el fiador en su caso, ante el notario designado por la Hacienda, la correspondiente escritura de fianza, espresándose en ella el objeto, la finca ó fincas en cuya garantía se hipotecan y la cantidad á que quedan afectas. Otorgada la escritura, debe el comprador presentar la primera copia de ella en la administracion económica de la provincia, á fin de que esta disponga se inscriba en el registro de la propiedad donde radique la finca hipotecada, y hecho que se una al espediente matriz (1). Son de cuenta del comprador los derechos del registrador de la propiedad y los demás gastos de estos espedientes.

Para la *fianza en efectos públicos* son admisibles los títulos de la deuda diferida ó consolidada, hoy renta perpétua al 3 por 100, por el precio de la cotizacion de la bolsa, y las acciones de carreteras, del canal de Isabel II y de ferro-carriles por todo su valor nominal. Para prestarla, el comprador presentará en la tesorería de Hacienda pública de la provincia, con doble factura y espresion del objeto, los títulos suficientes á cubrir el total valor del arbolado, á fin que por dicha oficina se remitan á la Direccion de la Caja general de depósitos, la cual espedirá la correspondiente carta de pago, como depósito necesario impuesto por el interesado. Este documento se remitirá á la tesorería de que procedan los valores, para que la administracion lo una al espediente de su referencia, ó tomando nota de él lo entregue al comprador, como se practica generalmente, á fin de que este pueda cobrar los intereses, segun vayan venciendo (1).

Estas fianzas no pueden alzarse hasta que la Hacienda reciba el total importe del valor del arbolado, por el cual fueron prestadas, y un plazo mas de los pendientes, si la finca se compone de suelo y arbolado; ó hasta que estén pagados todos los plazos, si solo forma su valor el arbolado. Y no deben exigirse cuando los compradores anticipen en su totalidad dichos pagos, segun el caso respectivo, como igualmente cuando el valor del arbolado ó monte no esceda del importe del primer plazo (2).

8.ª Respetar los arrendamientos existentes. Los compradores no pueden hacer variacion alguna en el arriendo de las fincas que adquieran hasta que cumpla el año agrícola corriente á la toma de posesion, segun la costumbre de cada localidad, en los prédios rústicos: tambien el año corriente, en las fábricas y artefactos; y en las fincas urbanas, hasta 40

(1) Arts. 147, 148 y 149 de dicha instruccion.

(1) Arts. 147 y 150 de id., modificados por la Real órden de 30 de Octubre de 1862.

(2) Arts. 147, 151 y 152 de id, modificados por id.

dias despues de la toma de posesion. Trascurridos estos plazos se tienen por caducados los arrendamientos existentes, aunque no haya concluido el tiempo estipulado, y pueden por tanto los compradores despedir á los arrendatarios, los cuales solo tienen derecho á la indemnizacion de los abonos y mejoras existentes en las fincas rústicas, segun la costumbre de cada localidad. Esta indemnizacion es de cuenta del comprador á juicio de peritos, si no hay avenencia, á no ser que prefiera dejar subsistente el contrato de arrendamiento hasta que termine el plazo estipulado; y lo propio en los que hayan sido hechos á renta y mejora por cierto número de años, siempre que consten por escritura pública y las fincas hayan sido plantadas de viña y arbolado por los colonos (1).

9.° Estar á todas las resultas de haberse constituido en *mora*, no pagando á su tiempo el primer plazo ó cualquiera de los sucesivos, sufriendo las consecuencias civiles y penales de la declaracion de quiebra, como se espondrá al tratar de esta materia en la seccion VI.

Y por último, todas las demás obligaciones que se derivan de la naturaleza de este contrato, y de la moralidad y buena fé que deben reputarse inherentes al mismo.

§. 2.° *Derechos del comprador.*

Los derechos del comprador son correlativos á sus obligaciones y á las del vendedor. Esta reciprocidad exige que algunos de ellos sean á la vez obligaciones, como hemos indicado en el párrafo anterior. Se derivan de los mismos principios, esto es, de la naturaleza del contrato, de la moralidad y buena fé que deben serle inherentes, y de los pactos ó condiciones especiales, que pueden modificar, y modifican realmente, los derechos que nacen de la naturaleza de la compra-venta, siempre que no alteren la esencia del mismo contrato. De estos últimos vamos á tratar aquí solamente por las razones indicadas al principio de esta seccion, esponiendo los que pertenecen á los compradores de bienes nacionales en virtud de las leyes y disposiciones especiales de la materia.

Tienen derecho estos compradores:

1.° A que se les entregue la finca comprada perfectamente deslindada, de suerte que no pueda haber duda alguna sobre su identidad y estension ó cabida. Tiene la obligacion el Estado, como vendedor, de verificar la entrega del modo indicado, poniendo en posesion al comprador luego que verifica el pago del primer plazo, como se ha dicho en el párrafo anterior. Para que pueda llenar cumplidamente esta obligacion tiene el derecho y el deber de aclarar y resolver por la vía gubernativa, y en su caso por la contencioso-administrativa, cuantas dudas y cuestiones se susciten sobre la designacion de la cosa vendida y ejecucion del contrato, hasta dejar al comprador en quieta y pacífica posesion. De estas incidencias se tratará en la seccion IX.

2.° A ser indemnizados por la Hacienda pública de las cargas no espresadas en la escritura de venta, que resulten despues contra la finca (1). Sobre el modo de verificar esta indemnizacion espondremos lo conveniente en la seccion VIII, y en el párrafo 6.° de la IX. Diremos aquí, sin embargo, que cuando un gravámen ó derecho cualquiera sea reclamado contra la finca ó fincas vendidas por la nacion, y fuese declarado legítimo, ya gubernativamente, ya por los tribunales, el comprador podrá reconocerlo, á condicion de que se le rebaje el capital del importe de las obligaciones ó plazos que tenga pendientes, ó manifestar su negativa, para que la Junta superior de ventas acuerde lo que crea conveniente (2). Este acuerdo habrá de ser, ó la indemnizacion al comprador, ó la nulidad de la venta.

3.° A la indemnizacion de los desperfectos que hayan sufrido las fincas despues de tasadas y antes de tomar posesion, ó á que se declare nula la venta. Quince dias improrogables tiene de término el comprador para

(1) Arts. 158 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855; 1.° y 2.° de la ley de 30 de Abril de 1856.

(1) Art. 171 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855.

(2) Art. 174 de id.

hacer estas reclamaciones, á contar desde el dia de la posesion; y si dejase de tomarla, es considerado como poseedor para dicho efecto luego que trascurre un mes, contado desde el dia en que verificó el pago del primer plazo, como ya se ha dicho. Puede deducirlas siempre que al tomar posesion se notase que las fincas habian desmerecido de su valor con posterioridad á la tasacion por desperfectos causados en las mismas, y tambien por falta de sus cabidas señaladas, de arbolado, ó por cualquiera otra causa justa. En tales casos se formará espediente, si lo solicita el comprador dentro de dicho plazo, y prévio reconocimiento pericial y tasacion de los desperfectos, se dará cuenta á la junta de provincia, para que con su dictámen lo remita á la superior de ventas, la cual acordará el medio de indemnizar al comprador si lo creyese justo, ó la nulidad del remate, segun convenga á los intereses del Estado (1).

De consiguiente, la eleccion entre la indemnizacion y la nulidad del remate es del Estado, y no del comprador. Solo en un caso no puede acordarse la nulidad, sino la indemnizacion; cuando las faltas ó perjuicios han sido causados por los agentes de la Administracion é independientes de la voluntad de los compradores (2), pues no seria justo que en este caso el comprador fuera privado contra su voluntad del derecho adquirido á la finca. No deben considerarse como agentes de la Administracion para dicho efecto los peritos por los actos de medicion y declaraciones periciales que dieren sobre la cabida, valor y demás circunstancias de las fincas (3). En todos estos casos quedan á salvo las acciones civiles ó criminales que procedan contra los culpables.

Aun tendremos que volver á tratar de esta materia, en la seccion IX, relativa á las incidencias de las ventas, especialmente sobre los efectos que produce la falta ó esceso de cabida y sobre los demás casos de lesion. Concluirémos este punto indicando que los acuerdos de la Junta superior de ventas sobre indemnizacion ó nulidad por cualquiera de las causas antedichas, deben elevarse con los espedientes á la aprobacion del Ministerio de Hacienda, en razon á que los productos de las ventas constituyen una parte del haber del Tesoro, y por consecuencia no debe concederse indemnizacion alguna que lo disminuya, sin conocimiento de dicho Ministerio (1).

4.° A la eviccion y saneamiento, conforme á las reglas del derecho comun (2). Si hallándose el comprador en pacífica posesion de la finca comprada al Estado, fuese demandado ante cualquier tribunal sobre la misma posesion, sobre la propiedad, ó sobre cargas ó servidumbres que no se hubiesen comprendido en la escritura de venta, deberá citar á la Hacienda pública para que se presente en el juicio, cumpliendo la obligacion á que está tenida de eviccion y saneamiento. Pero téngase presente que los jueces no pueden admitir estas demandas, aunque se dirijan contra particulares, sin que el demandante acompañe documento de haber hecho la reclamacion gubernativamente y sídole denegada. Estas reclamaciones gubernativas deben incoarse en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudicacion de la finca. Pasado este término, los jueces ordinarios deben admitir, sin necesidad de aquel requisito, las demandas de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fincas, sustanciándolas con los poseedores, sin perjuicio de citar de eviccion á la Administracion (3).

Esta limitacion de los seis meses para entablar la vía gubernativa y acreditar que ha sido negada la reclamacion, fué acordada por el Real decreto citado de 10 de Julio de 1865. En la esposicion que le precede, se consig-

(1) Arts. 157 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, y 7.° del R. decreto de 10 de Julio de 1865.
(2) Art. 8.° de dicho Real decreto.
(3) Real órden de 30 de Marzo de 1867.

(1) Real órden de 24 de Diciembre de 1862.
(2) «La prestacion de la eviccion y el saneamiento son condiciones naturales del contrato de compra-venta.» Para que la Administracion esté obligada á cumplirlas, debe haber sido citada de eviccion en tiempo oportuno. (*Real decreto-sent. del Consejo de Estado de 19 de Octubre de 1859.*)
(3) Arts. 171, 172 y 173 de la instr. de 31 de Mayo de 1855; Real órden de 11 de Abril de 1860, y art. 9.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865.

nan las justas razones de esta novedad. Dice así: «Por último, necesario es fijar un término dentro del cual concluyan las atribuciones de la Administracion para entender en las cuestiones que susciten los que, considerándose dueños de fincas vendidas por el Estado, pretendan que les corresponde su dominio, ó que al menos tienen un derecho real sobre ellas. Como esto es una escepcion del derecho comun, segun el que debe conocer de estas cuestiones el órden judicial, es necesario reducirla á un término muy corto, pasado el cual los tribunales sean reintegrados en sus naturales funciones, y no quede como ahora ilimitada tal facultad de la Administracion.» Facultad que aun conserva respecto de las demandas contra el Estado, no comprendidas en esta escepcion.

5.° A la exencion del derecho de hipotecas ó impuesto hipotecario, en las ventas y reventas que hagan de los bienes comprados á la nacion, durante los cinco años siguientes al dia de su adjudicacion, como tambien en las adjudicaciones para pago de deudas y en las permutas (1).

6.° A que se les entreguen los títulos de propiedad, y en su defecto los de posesion de la finca, en el tiempo y forma que se espuso en el párrafo 13 de la seccion anterior, al tratar del registro é inscripcion de las escrituras de venta. Antes de verificar la entrega debe la administracion económica tomar nota circunstanciada de la fecha del otorgamiento de la escritura de adquision, notario ante quien pasó esta, dia en que se tomó razon en el registro de la propiedad y demás circunstancias precisas, que puedan interesar al Estado (2).

7.° A los productos de las fincas desde el dia de la fecha de la carta de pago que acredite el del primer plazo del precio del remate. Hecho este pago, tiene derecho el comprador á que se le entregue la finca, como de su propiedad, y le pertenecen por tanto los productos de la misma. Para determinar lo que le corresponde, debe hacerse el oportuno prorateo por la administracion económica de la provincia, la cual espedirá el libramiento necesario para que la tesorería haga al comprador el abono ó entrega de lo que le pertenezca. Dicho prorateo debe ejecutarse, no solo en el caso de que las fincas estén arrendadas, sino tambien en el de que se atienda á su cultivo y produccion directamente por el Estado ó por las corporaciones á que pertenecieran, sirviendo de base el año agrícola, segun la costumbre de la localidad. En el segundo caso se procederá á la liquidacion y rebaja de los gastos causados en el cultivo, que serán de abono al productor, prorateándose luego el líquido entre éste y el comprador (1).

8.° Y por último, á la bonificacion del tanto por ciento correspondiente, segun la cuantía y procedencia de los bienes, en el caso de pagar al contado ó de anticipar algunos plazos, como se espondrá en la seccion siguiente.

SECCION V.

DEL PRECIO: PLAZOS Y FORMA EN QUE HA DE PAGARSE.

El *precio* es un requisito *esencial*, é imprescindible por tanto, de la compra-venta, y su pago una de las primeras obligaciones del comprador. En este punto no hay diferencia, ni podia haberla, entre la compra-venta por derecho comun y la de bienes nacionales.

Tampoco la hay, al menos esencial, en que el precio ha de ser *verdadero*, *cierto*, *justo* y *en dinero*, tal como se esplicó en la seccion VII del artículo **COMPRA-VENTA** (página 686 del tomo anterior), porque de otro modo el contrato no seria de venta; sino de otra clase. Y sin embargo, sobre los dos últimos estremos la legislacion especial del ramo

(1) Arts. 24 de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y 175 de la instr. de 31 del propio mes; Reales órdenes de 30 de Julio y 16 de Octubre de 1860, y 30 de Abril de 1866. Véase tambien la R. órden de 9 de Febrero de 1859.

(2) Art. 176 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, modificado en parte por el 16 del R. decreto de 11 de Noviembre de 1864.

(1) Art. 158 de la citada instrc., y R. órden de 6 de Agosto de 1860.

ha establecido condiciones especiales, á que han de subordinarse los compradores, como las ha establecido tambien en cuanto á la forma y plazos del pago. La importancia de esta materia exige que sea espuesta con la estension conveniente, y por esto la hemos reservado para una seccion especial, como se indicó al tratar de las obligaciones del vendedor.

Que el precio de estas ventas es *verdadero* y *cierto* no hay para qué demostrarlo, atendida la significacion de estos calificativos, esplicada en el lugar antes citado. No es tan palmario el que sea *justo*, si no en todos, en muchos casos, si por precio justo se entiende, no el que convengan las partes libremente y y sin engaño; sino el que está ajustado al valor que tiene la cosa segun la estimacion general; al precio corriente que sirve de tipo en las ventas de igual clase entre particulares, en la localidad donde está situada la finca.

El precio por el que se sacan á la venta estas fincas, reune todas las condiciones apetecibles para que sea estimado como justo: se fija por tasacion pericial, teniendo en cuanto el valor corriente en venta y renta, y para mayor imparcialidad concurren dos peritos, uno por parte del Estado, como vendedor, y otro elegido por el procurador síndico del pueblo, como representante de los intereses comunes. En la prevision humana, racionalmente no cabe mas para proceder con justicia. Pero con mucha frecuencia, en casi todos los casos, se rematan las fincas por un precio mucho mayor que el que ha servido de tipo para la subasta. Unas veces por cálculo ó por conveniencia particular, y no pocas por amor propio, y aun por fines reprobados, como el que se proponen los llamados *primistas*, se puja en la licitacion pública hasta el duplo, el triplo y aun mas del precio designado á la finca. ¿Es justo este precio? ¿Reune las condiciones legales para la eficacia de la venta? La contestacion seria negativa si hubiéramos de atenernos al derecho comun, segun el cual la lesion en mas ó en menos de la mitad del justo precio produce accion alternativa para la reparacion del precio, ó para la rescision de la venta. El caso *en menos* no puede tener aquí lugar, puesto que no se admite postura que no cubra el tipo de la subasta, y esta es otra circunstancia que hace desigual la condicion de los contratantes.

Sin embargo, por otras razones de conveniencia pública y tambien de moralidad, no menos atendibles, la legislacion especial del ramo se ha separado de la legislacion comun en este punto. El art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 ordena testualmente que «en la venta de estos bienes no se admitirán *demandas de lesion* ú otras dirigidas á invalidarlas;» y el Consejo de Estado, fundándose en esta disposicion, tiene declarado que las demandas de *lesion por error en el precio* están vedadas, y son por tanto inadmisibles en esta clase de ventas (1). Esta es la jurisprudencia y la ley del caso, que tiene tambien su apoyo en la equidad y en la justicia.

Como estas ventas se hacen en pública subasta, no cabe el *engaño*, que es el principal fundamento de la accion alternativa que concede la ley recopilada por la lesion de que se trata. El Estado anuncia la venta, reseñando debidamente la cosa y designando el precio mínimo que admitirá por ella. El que quiere comprar echa sus cuentas, tomando en consideracion las mejoras de que es susceptible la finca, los productos que puede obtener, la ventaja de pagar en largos plazos, etc., etc., y en vista de todo se decide á pujar hasta la cantidad que calcula conveniente á sus intereses. En nada de esto es presumible el engaño; podrá haber error de cálculo; pero error imputable al mismo comprador, y que por tanto no puede utilizar en su beneficio. Si el error procediese de hechos imputables á la Administracion, ya sería otra cosa; podría llegarse hasta la nulidad de la venta, como se esplicará en el §. 3.° de la seccion IX. No hay pues engaño, ni motivo por tanto para la demanda de lesion.

(1) Decretos-sentencias del Consejo de Estado de 25 de Enero de 1864, 5 de Febrero de 1865 y otras.

Y ni aun puede decirse en rigor que el precio esceda los límites de lo justo, porque haya subido al doble ó triple de la tasacion pericial. Esa circunstancia no puede calificarse en estas ventas por las condiciones ordinarias; sino por las estraordinarias del caso, y estas nadie puede apreciarlas como el mismo comprador. Cuando éste ofreció por la finca lo que tuvo por conveniente, fué porque la estimó en aquel precio atendidas sus circunstancias particulares, y de consiguiente para él era el precio justo. ¿Es por ventura fijo ó inmutable el precio de las cosas inmuebles? Sube ó baja segun las circunstancias generales, ó las particulares de los contratantes, y esto es lo que sucede en el caso de que se trata. Lo injusto seria que los compradores, despues de haber procedido libre y espontáneamente, pudieran valerse de sus propios hechos para introducir en la administracion pública la perturbacion consiguiente con las demandas de lesion, cuando les conviniera alegar que se habian equivocado en sus cálculos.

Por esto hemos dicho y repetimos, que por razones de moralidad y de conveniencia pública está mandado que no se admitan demandas de lesion por engaño ó error en mas ó en menos de la mitad del justo precio, ni otras dirigidas á invalidar las ventas de bienes nacionales. Esta es la ley, confirmada por la jurisprudencia, y á ella es preciso atemperarse, aun prescindiendo de las razones antes espuestas en apoyo de esa teoría.

La última condicion del precio es que sea *en dinero*, ya se pague al contado, ya á plazos, pues no hay venta, sino permuta, cuando se conviene en que se haga el pago en efectos que no sean dinero ó moneda corriente. Por regla general los bienes nacionales se venden á dinero; pero en algunos casos pueden pagarse en papel de la Deuda pública y en billetes ó bonos del Tesoro, como luego veremos. ¿Alterará esta circunstancia la naturaleza del contrato? De ningun modo, por varias razones: 1.ª, porque el precio se ajusta en dinero: 2.ª porque los efectos públicos que se admiten en pago, representan tambien dinero que ha recibido anticipadamente la nacion: son créditos contra el Estado, y equivalen por tanto á dinero efectivo; y 3.ª y principal, porque la ley así lo ha establecido.

Espuesto ya lo que concretamente se refiere al precio, veamos los *plazos y forma en que ha de pagarse*. Las disposiciones sobre este punto responden á los fines político y económico de la desamortizacion.

Para facilitar las ventas de los bienes nacionales, y que se interesen en ellas el mayor número posible de individuos, hasta los de escasa fortuna, en todas las disposiciones sobre la materia se ha autorizado el pago del precio en varios plazos anuales. Por el Real decreto de 19 de Febrero de 1836 se estableció que se pagara al contado la quinta parte, y el resto por plazos iguales en los ocho años siguientes, si el comprador habia optado por pagar en títulos de la deuda consolidada, y en diez y seis años, si pagaba en dinero.

Por la ley de 2 de Setiembre de 1841, que declaró bienes nacionales todos los del clero secular, mandando ponerlos en venta, se dispuso que el precio del remate de estos bienes, cuando su valor en tasacion no escedia de 40,000 rs., se pagara á dinero metálico en 20 plazos iguales y 19 años; y si escedia de aquel valor, en cinco plazos y cuatro años, entregando el 10 por 100 de cada plazo en dinero metálico, y el resto por partes iguales en títulos de la deuda consolidada, en cupones de la misma, y en deuda sin interés, vales no consolidados ó deuda negociable con interés á papel.

La ley de 1.º de Mayo de 1855, denominada de desamortizacion civil y eclesiástica porque comprendió todos los bienes de una y otra procedencia, estableció unas mismas reglas para todos, derogando las diferencias anteriores; pero fué reformada por la de 11 de Julio de 1856, la cual introdujo nuevas diferencias, haciendo distincion, para los efectos de que tratamos, entre bienes del Estado y de corporaciones civiles. Cuales pertenezcan á una y otra clase se esplicó en el §. 6.º de la seccion I. En vista de una y otra ley consignarémos lo que hoy se halla vigente sobre esta materia.

Bienes del Estado. Para los efectos de que se trata, se dividen en dos clases: de menor y de mayor cuantía. Son *de menor cuantía* las fincas, cuya tasacion ó capitalizacion no esceda de 20,000 rs.; y *de mayor cuantía* todas las demás. Aunque en ellos está comprendido el 20 por 100 de propios, esta parte se vende con el 80 restante que pertenece á los ayuntamientos, y de consiguiente á pagar en los plazos y forma que luego se dirá para los bienes de corporaciones civiles, si bien se espiden dos juegos de pagarés, para hacer la debida distincion de la parte respectiva al Estado y á los pueblos (1). Los bienes del patrimonio de la Corona tambien se pagan en los plazos y forma establecidos para los de corporaciones civiles (2). Salvas estas dos escepciones, y las relativas á salinas, minas y pequeñas parcelas, que luego se indicarán, los demás bienes del Estado, inclusos los del clero, se pagan en la forma siguiente:

Los *de menor cuantía* en 20 plazos iguales durante 19 años; el primero de aquellos á los 15 dias de notificada la adjudicacion de la finca, y los 19 restantes en los años sucesivos. Los compradores que anticipen uno ó mas plazos tienen derecho al abono de 3 por 100 anual, por el anticipo que hagan (3).

Los *de mayor cuantía* se pagan en 15 plazos y 14 años, en la proporcion que sigue: al contado el 10 por 100 del precio del remate, cuyo primer plazo debe pagarse tambien dentro de los 15 dias antes indicados: en cada uno de los dos primeros años siguientes, el 8 por 100: en cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100, y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100; resultando así los 15 plazos y 14 años antedichos. Los compradores que anticipen el pago de uno ó mas plazos tienen derecho al abono del 5 por 100 anual; pero en la inteligencia de que solo son admisibles á descuento los pagarés que puedan anticiparse por uno ó mas años completos, y no los que venzan dentro del año en que se verifique el pago, teniendo derecho en aquel caso al abono del interés correspondiente desde el dia en que se formalice en tesorería el ingreso de los plazos anticipados (1).

Por la ley citada de 1.° de Mayo de 1855 se dispuso se hiciera en metálico el pago de todos estos bienes, y se destinó un 50 por 100 á la amortizacion de la deuda pública, y el otro 50 por 100 á obras públicas de interés y utilidad general. Mas por la de 11 de Julio de 1856 se concedió á los compradores la facultad de pagar el 50 por 100, destinado á la amortizacion de la deuda, en metálico ó en papel de la consolidada y de la diferida, cuyo papel se les admite por el cambio medio del valor á que se cotice el dia anterior al en que debe verificarse el pago, que es el del vencimiento del pagaré. En este caso tienen derecho al abono de un 2 por 100, de la parte del plazo que satisfagan en papel (2). Tambien es potestativo de los interesados el entregar dicho papel en las oficinas de la Deuda ó en las tesorerías de la provincia en que deban realizar los pagarés. Las formalidades con que han de hacerlo en uno y otro caso se determinan circunstanciadamente en el artículo 19 de la citada instruccion de 11 de Julio de 1856: véase en la seccion 1.ª *de la parte legislativa.*

Bienes de corporaciones civiles. Estos bienes, sean de mayor ó de menor cuantía, se pagan en diez plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el primero á los 15 dias siguientes al de notificarse la adjudicacion, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor. Estos pagos han de hacerse precisamente en metálico, y su producto líquido debe ingresar en la Caja de depósitos para convertirlo despues en inscripciones intransferibles de la deuda pública á favor de la corporacion á que

(1) Art. 8.°, núm. 4.° de la instrc. de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 4.° de la ley de 18 de Diciembre de 1869.
(3) Arts. 19 de la ley y 17 de la instrc. de 11 de Julio de 1856.

(1) Arts. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 y 17 de la instrc. de 11 de Julio de 1856, y Reales órdenes de 23 de Julio de 1860 y 10 de Setiembre de 1863.
(2) Arts. 20, 21 y 22 de la ley, y 18, 19 y 20 de la instrc. de 11 de Julio de 1856.

pertenezcan los bienes (1). Tambien tienen derecho los compradores al abono del 5 por 100 de interés por los plazos que anticipen, como en los bienes del Estado.

En la misma forma y plazos, segun se ha dicho antes, han de pagarse el 20 por 100 de propios y los bienes del patrimonio de la Corona, no obstante pertenecer al Estado. Lo propio las salinas y minas, puestas en venta. No así las fábricas de pólvora, que se pagan en los plazos establecidos para los bienes del Estado de mayor cuantía, ni las pequeñas parcelas que por sí solas no formen solares edificables, las cuales han de pagarse al contado, como se espondrá en sus secciones respectivas.

En varias ocasiones el Gobierno ha hecho operaciones de crédito bajo la garantía de los bienes nacionales, emitiendo con ciertas bonificaciones billetes del tesoro ú otra clase de papel, que ha admitido en pago de dichos bienes. La última operacion de esta clase ha sido la del empréstito de 200 millones de escudos efectivos, representados por bonos del Tesoro público, al portador, de á 200 escudos nominales cada uno, con renta de 12 escudos al año, emitidos al tipo de 80 por 100, y amortizables en 20 años por todo su valor nominal. Esta operacion se decretó por el Gobierno provisional en 28 de octubre de 1868, garantizando la amortizacion é intereses con los pagarés de los compradores de bienes desamortizados. Por el art. 3.° de otro decreto de 23 de Noviembre siguiente se mandó que dichos bonos serán admitidos por todo su valor nominal en pago de los bienes nacionales que se enagenen por el Estado, como especialmente afectos al pago de los intereses y amortizacion del empréstito. Y por otro decreto de 22 de enero de 1869 se declaró que se admitirán por todo su valor nominal en pago de los bienes vendidos y que se vendan despues del decreto de creacion de este papel de 28 de Octubre anterior, y solo al tipo del 80 por 100 en pago de los vendidos antes de esta fecha y cuyos plazos hayan vencido con posterioridad á la misma, siempre que los pagarés correspondientes estén libres de toda hipoteca. Al propio tiempo se mandó admitir por todo su valor en pago de aquellos bienes las cartas de pago de los imponentes por depósitos voluntarios en la Caja general de los mismos.

Por órden del Poder ejecutivo de 8 de Marzo siguiente se dictaron varias reglas para la admision de dichos valores en pagos de ventas y redenciones de bienes desamortizados, en cuyas reglas se determinan las liquidaciones y demás operaciones de contabilidad que deben hacer las oficinas de Hacienda. A los particulares solo corresponde presentar los valores ó títulos con facturas duplicadas, teniendo presente que deben ser ajustados á lo que haya de satisfacerse con ellos, completando en metálico la diferencia que faltare, ó cediendo al Estado el esceso cuando le hubiere, pues no se devuelve lo que sobre. Los bonos y sus cupones deben taladrarse á presencia del que los presenta. Este queda obligado á responder durante seis meses de la legitimidad de ellos, bajo su firma si es de garantía, ú otra á satisfaccion de los tesoreros, consignando dicha obligacion en las facturas. Y hechas todas las operaciones para el canje, recibe el comprador la carta de pago, ó sus mismos pagarés cancelados.

Al verificar el pago del primer plazo, deben los compradores, como ya se ha indicado, otorgar y firmar pagarés, en papel del sello de 2 rs., por cada uno de los plazos restantes en que deben pagar el precio del remate, además de hacerse constar en la escritura de venta, que la finca queda especialmente hipotecada á su pago. Dichos pagarés quedan en poder de la Hacienda para hacerlos efectivos á su respectivo vencimiento, del modo que se espondrá en la seccion que sigue (1).

El pago debe hacerse, por regla general, en la tesorería de la provincia en que ha sido domiciliado, que es donde radica la finca;

(1) Arts. 13 y 23 de la ley, y 12, 21 y 22 de la instrc. de 11 de Julio de 1856.

(1) Arts. 154 y 155 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y 88, núm. 17 del reglamento de 8 de Diciembre de 1869.

pero tambien puede hacerse en la de Madrid ó en cualquiera otra del reino, diferente de aquella. Para esto es preciso obtener la autorizacion conveniente de la Direccion general del ramo, y ha de espresarse en la solicitud el dia en que vence el plazo que trata de satisfacerse, el importe de éste, la provincia en que deberia ingresar, y la finca ó censo de que proceda. No puede darse curso á estas solicitudes si resulta que, cuando se pide la traslacion de pagos, hace mas de diez dias que está el pagaré vencido. Si hubiese apremio incoado en la provincia respectiva, no se levantará ni suspenderá, aunque se espidan las órdenes para verificar el pago en otra provincia, mientras no se acredite, presentando la carta de pago, que éste se ha realizado efectivamente (1).

SECCION VI.

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRA LOS COMPRADORES POR FALTA DE PAGO.

El que se presentó á hacer postura en una subasta de bienes nacionales, como en toda subasta pública, adquiere el compromiso de pagar el precio ofrecido por el mismo, si queda la finca rematada á su favor, en los plazos estipulados. Puede suceder que deje de pagar el primer plazo; ó que, pagado éste, no lo verifique de alguno de los posteriores. En el primer caso, aunque el contrato quedó perfecto por el consentimiento de las partes, no ha llegado á consumarse, puesto que no se ha realizado el pago del precio, ni la entrega de la cosa. No así en el segundo, pues en él quedó el contrato, no solo perfecto; sino tambien consumado, y ya el comprador no es mas que un deudor á la Hacienda pública de la parte del precio que debe pagar á plazos, exigible al vencimiento de estos, con garantía de la hipoteca especial á que queda afecta la misma finca vendida.

Son tan distintas las circunstancias de uno y otro caso, que hasta por derecho comun habrian de emplearse diferentes procedimientos. En el primero, competeria al vendedor la accion ordinaria para obligar al comprador al cumplimiento del contrato, ó exigirle en su defecto los daños y perjuicios. En el segundo podria utilizar aquel la accion ejecutiva para el cobro de los plazos vencidos y no pagados, con los intereses legales desde el dia del vencimiento.

Partiendo de estos principios la legislacion especial del ramo, ha establecido tambien procedimientos diferentes, acomodándolos á la índole gubernativa y ejecutiva á la vez, de que deben participar. Para el caso de que el rematante no verifique el pago del primer plazo, ha establecido la declaracion de quiebra, con nueva venta de la finca y responsabilidad consiguiente de parte de aquel; y el procedimiento de apremio contra el comprador, para hacer efectivos los plazos posteriores al primero, que deje de pagar á su vencimiento. Los espondremos con la debida separacion.

§. 1.° *De la quiebra por falta de pago del primer plazo, y sus efectos.*

Ya se ha dicho que dentro de los 15 dias siguientes al en que se notifique al rematante la adjudicacion de la finca, debe realizar el pago del primer plazo del precio del remate. Si no lo verifica, seria procedente obligarle á su cumplimiento; pero como este procedimiento seria largo, y acaso sin resultado, se ha creido mas espedito el medio de sacar á nueva subasta la finca, exigiendo del primer rematante la responsabilidad que luego indicaremos. Como en estos casos no ha llegado á desprenderse el Estado de la propiedad y posesion de la finca, puede sin ningun inconveniente procederse á la nueva subasta, reputando sin efecto el anterior remate.

Para ello debe preceder la *declaracion de quiebra* hecha por el gobernador, hoy por el jefe económico de la provincia: locucion impropia, si se atiende á la significacion forense de la palabra *quiebra*; pero que, usada en la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y en las

(1) Arts. 22, 203 á 206 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y circular de la Direccion de 25 de Enero de 1867.

disposiciones posteriores, se ha hecho técnica, y debemos aceptarla en el concepto de meros espositores del derecho constituido. Y todavía no hay precision en el lenguaje oficial acerca de si la declaracion de quiebra se refiere al comprador ó á la finca, pues suele usarse indistintamente en uno y otro sentido, como puede verse en las disposiciones oficiales que tratan de la materia. *Declarar en quiebra una finca* es aun mas impropio y anómalo que *declarar en quiebra al comprador*, cuando todavía no se sabe si podrá ó no cumplir sus compromisos. Pero repetimos, que tiene ya su acepcion convencional y oficial esa enunciativa para significar el procedimiento, que se emplea contra el comprador de bienes nacionales que no ha pagado el primer plazo del precio del remate, para exigirle la responsabilidad en que ha incurrido.

Esta responsabilidad es de dos clases: una *penal*, exigible en todo caso; y la otra *civil*, limitada á la indemnizacion de perjuicios, cuando los haya.

La *responsabilidad penal* consiste en una multa igual á lo que importe la cuarta parte del valor nominal á que ascienda el primer plazo que dejó de pagar el interesado, no bajando nunca esta multa de 1,000 rs. si dicha cuarta parte no ascendiera á esta cantidad, con la prision subsidiaria por vía de apremio, á razon de un dia por cada 10 rs., pero sin que pueda esceder de un año.

Corresponde al juez de la subasta en que se hizo la postura mayor, la exaccion de esta multa. Para ello, así que reciba el aviso, que luego se dirá, de que el rematante no ha hecho efectivo el pago del primer plazo, debe dictar auto á continuacion para que se le haga saber pague la indicada multa en el acto de la notificacion, y que si no lo verifica, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo momento, sea reducido á prision, por vía de apremio, por el tiempo antes indicado. Esta prision ha de sufrirse siempre en la cárcel de la cabeza del partido judicial. La ejecucion de dicha providencia ha de acreditarse en el espediente, á continuacion de la misma, por diligencia del escribano, el cual unirá en su caso la mitad correspondiente del papel de multas, ó acreditará el ingreso del comprador en la cárcel. Se ha establecido esta pena como medida coercitiva para obligar al rematante al cumplimiento de su compromiso, mediante á que no se le exige otra garantía que la de identificar su persona y domicilio, y para que sea eficaz manda la ley que se lleve á efecto inmediatamente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil á que diere lugar la subasta en quiebra (1).

Otra pena, impuesta á los rematantes declarados en quiebra, es la de no admitirles postura en los remates sucesivos que se hagan de otras fincas, como se indicó ya en el §. 6.° de la seccion III. Para que sea efectiva esta pena, los comisionados de ventas deben llevar un libro donde anoten los nombres de los declarados en quiebra, número de órden de la finca y dia en que se subastó por primera vez, á fin de llamar la atencion del juez si alguno de ellos se presentase á hacer postura (2).

La *responsabilidad civil* consiste en la indemnizacion que el rematante quebrado debe abonar al Estado de la diferencia que resulte en contra de éste entre el nuevo y el anterior remate.

Estos son los efectos que produce la declaracion de quiebra contra el comprador ó rematante que no paga á su tiempo el primer plazo. Veamos ahora el procedimiento para dicha declaracion, para la nueva subasta de la finca, y para hacer efectiva la responsabilidad civil, esponiendo lo que en el dia se halla vigente de los arts. 159 á 162 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que dictaron reglas para ello, las cuales han sido ampliadas y algun tanto modificadas por las Reales órdenes de 14 de Junio de 1859 y 25 de Enero de 1867.

Pasados los 15 dias marcados por dicha instruccion, el comisionado de ventas debe hacer que por la seccion correspondiente de la administracion económica se ponga nota de si resulta pagado el primer plazo, y caso

(1) Arts. 37 á 40 de la ley de 11 de Julio de 1856.

(2) Arts. 162 y 163 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

negativo dará inmediatamente cuenta al gobernador, hoy al jefe económico de la provincia. Este, constando que han pasado los 15 dias y que no se ha pagado el primer plazo, hará desde luego la declaracion de quiebra, mandando se anuncie la nueva subasta de la finca para que se lleve á efecto la venta sin demora. Al propio tiempo debe oficiar al juez, ante quien se celebró la subasta, poniendo en su conocimiento dicha declaracion de quiebra para que pueda imponer al rematante la responsabilidad penal, á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 1856, segun se ha espuesto anteriormente. Igual aviso dará al promotor fiscal de Hacienda, hoy al del propio juzgado ordinario, á fin de que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva dicha responsabilidad.

«La tramitacion de los espedientes para la nueva subasta se arreglará en un todo á la primera, escepto la tasacion; pero se estampará en el anuncio la causa del nuevo remate, la cantidad á que ascendió en el anterior, y el nombre del rematante.» Así lo dispone el artículo 161 de la citada instruccion, de suerte que han de repetirse todos los trámites, anuncios y plazos de la primera subasta, sirviendo de tipo el mismo que sirvió para esta. Las nuevas actuaciones se estenderán á continuacion del primitivo espediente.

Hasta que se verifique el nuevo remate, puede el primer rematante recobrar su derecho á la finca cumpliendo por su parte el contrato, con suspension de la nueva subasta y sus efectos. Para ello es indispensable que satisfaga el primer plazo y presente la carta de pago al juez de la subasta antes de la conclusion de los 30 dias del anuncio, ó á mas tardar en el acto del remate, pero antes de su terminacion. En tal caso debe suspenderse la subasta en el punto donde se presente dicho documento, siempre que el interesado pague además todos los gastos de la misma, y en el propio dia se dará cuenta por el comisionado de ventas al jefe económico, y por éste á la Junta superior (1).

(1) Art. 162 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, y reg. 14 de la Real órden de 3 de Setiembre de 1862.

Las disposiciones antes citadas no hablan mas que de la suspension de la nueva subasta y sus efectos; pero no de los demas efectos de la declaracisn de quiebra. De consiguiente no deberá eximirse al rematante del pago de la multa antes indicada, y en su defecto de la prision subsidiaria, en que le declara incurso la ley desde el momento en que se hace la declaracion de quiebra, como pena é indemnizacion á la vez á favor del Estado por haber faltado al cumplimiento de su compromiso. Esto es lo legal: en la práctica, sin embargo, parece que por equidad se le exime de toda responsabilidad civil y penal cuando paga el primer plazo antes de la nueva subasta.

Verificada la subasta en quiebra, si el Estado saliese perjudicado por ella, la administracion económica hará inmediatamente la liquidacion de la responsabilidad civil que afecta al primer rematante, y procederá á exigirla por la vía de apremio, en la forma que se indicará en el párrafo siguiente. Si resultara beneficio, no tiene derecho á él el primer rematante, en razon á que, no habiéndose consumado el contrato por su culpa, no adquirió ningun derecho sobre la finca: no así cuando la quiebra ha sido por falta de alguno de los plazos posteriores al primero.

Concluiremos este punto indicando, que la administracion económica debe pasar al Gobierno cada tres meses una relacion de las quiebras que se hayan acordado, espresando el nombre del quebrado, su domicilio, la finca que remató y la cantidad en que se subastó; y los promotores fiscales, reclamando de los jueces las noticias necesarias, deben formar otra de los quebrados que han sido multados ó reducidos á prision, con espresion de la multa que pagaron ó la prision que sufrieron. De estas relaciones debe pasarse copia á los gobernadores á fin de que se publiquen en el *Boletin oficial*, para que los tribunales y la administracion puedan buscar á los que hayan eludido la ley (1).

(1) Dispos. 12 y 13 de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

§. 2.° *Del procedimiento de apremio y quiebra, por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero.*

Los compradores que, despues de consumada la venta con el pago del primer plazo del precio y la entrega de la cosa, dejan de satisfacer á su vencimiento cualquiera de los plazos posteriores, no tienen ni deben tener otro carácter que el de deudores á la Hacienda pública, y deben ser, por tanto, considerados y tratados como los demás deudores á la misma. Partiendo de este principio la legislacion especial del ramo, adoptó contra tales deudores la vía de apremio establecida para hacer efectivos los créditos contra la Hacienda, disponiendo que se embargaran y vendieran en primer lugar los bienes muebles, y en segundo los raices que tuviera el deudor, libres de obligaciones de desamortizacion; y careciendo de ellos, ó no siendo suficientes para cubrir su responsabilidad, que se procediera contra la finca especialmente obligada, declarándola en quiebra, y anunciando la subasta con cargo al quebrado de la diferencia que resultase en el precio de ámbos remates, y de los gastos que se hicieren en el segundo. Y el conocimiento de estas subastas se atribuyó á la jurisdiccion especial de Hacienda, como asunto propio de su fuero, atendida la naturaleza de la deuda (1).

Para entablar estos procedimientos debian preceder dos invitaciones de la administracion de Hacienda pública por medio de cédula, la primera dando al comprador el término de 15 dias para realizar el pago del plazo en descubierto, y trascurridos éstos, otra con el de diez; y si á pesar de todo no hubiera verificado el pago, entonces se espedia el apremio. Esta disposicion del art. 164 de la instruccion citada fué modificado por la 14 de la Real órden de 25 de Enero de 1867, por la cual se previno que, en vez de las dos invitaciones ó avisos, se diera uno solo diez dias antes de vencer el pagaré, recordando su vencimiento al que lo hubiere firmado; y si trascurridos 20 dias desde la fecha del aviso, ó 10 desde que venció el pagaré, no se hubiese satisfecho, debia disponer la administracion se procediera por la vía de apremio á hacerlo efectivo.

Por Real órden de 3 de Setiembre de 1862, de acuerdo con lo propuesto por la Direccion general del ramo é informado por el Consejo de Estado en pleno, se dictaron reglas circunstanciadas para estos procedimientos, á fin de evitar las dudas y prácticas diversas, á que habian dado lugar las disposiciones antes citadas y la Real órden de 22 de Mayo de 1861. Dichas reglas, *que pueden verse en la seccion 1.ª de la parte legislativa*, están basadas en los principios anteriormente espuestos, y acomodadas al procedimiento administrativo de apremio, que se hallaba establecido para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda. Pero hubo necesidad de reformar este procedimiento para ponerlo en armonía con ciertos derechos individuales, garantidos por la Constitucion política de 1869, y la reforma se hizo estensiva tambien al de que estamos tratando, como era consiguiente.

Dicha reforma está limitada á conceder á los jueces de paz la competencia para decretar la entrada en el domicilio de un español ó estranjero residente en España, con objeto de llevar á efecto los embargos de bienes acordados en el procedimiento administrativo, y para autorizar en el mismo la venta de bienes muebles ó inmuebles, cualquiera que sea el importe del débito. Con esto se consideran salvados los derechos individuales consignados en los arts. 5.° y 13 de dicha Constitucion, que prohiben la entrada en domicilio ageno sin consentimiento de su dueño, y que nadie sea privado temporal ó perpétuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesion de ellos sino en virtud de decreto ó sentencia de juez competente. En lo demás la tramitacion de estos procedimientos debe ser la que las leyes y disposiciones administrativas anteriores señalan á la vía de apremio.

(1) Arts. 164, 165 y 166 de la instrc. de 31 de Mayo de 1855, y Real órden de 3 de Setiembre de 1862.

Así lo dispuso la ley de las propias Córtes constituyentes, promulgada en 19 de Julio de 1869. Por decreto del Regente del reino de 3 de Diciembre del mismo año se aprobó la instruccion relativa al modo de proceder para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda pública, formada en cumplimiento del art. 7.° de dicha ley. En esta instruccion, que consta de cinco capítulos y 95 artículos, se ha reglamentado el procedimiento de apremio en todos sus trámites, ateniéndose á las disposiciones anteriores que en la misma se citan, y determinando la forma en que los jueces de paz deben ejercer las nuevas atribuciones que les han sido conferidas. Pero ni en aquella ley ni en esta instruccion se hizo mencion alguna de los deudores por plazos de ventas, ni por rentas y censos de bienes del Estado. De aquí el que los jueces de paz se negaran á autorizar los embargos en los procedimientos de apremio contra dichos deudores, y para salvar este conflicto se publicó el decreto de 7 de Marzo de 1870, declarándolos comprendidos en el art. 2.° de la citada instruccion de 3 de Diciembre, que designa los deudores que han de ser considerados como primeros contribuyentes para los efectos del apremio.

No bastó esta declaracion para allanar todas las dificultades, pues la especialidad del caso exigia disposiciones tambien especiales, como se habian dictado por la Real órden antes citada de 3 de Setiembre de 1862. Este vacío se ha llenado con el decreto de 23 de Junio del propio año 1870. Aunque el método de la Enciclopedia exije que del procedimiento de apremio se trate en su propio artículo, y allí se espondrá con la estension conveniente, ese mismo rigorismo exije que espongamos aquí lo que es especial del presente artículo. Por esto vamos á esplicar lo que dispone dicho decreto, aplicable á los deudores por plazos de bienes nacionales, sucesivos al primero, indicando á la vez las reformas hechas en el procedimiento ordenado por la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, que ha regido hasta ahora.

Dice aquel en su art. 1.° que «son aplicables á la exaccion de los débitos por rentas, pensiones y plazos de ventas de bienes nacionales las disposiciones de la instruccion de 3 de Diciembre de 1869, dictada para los procedentes de las contribuciones é impuesto que la misma menciona.» En principio, no se ha hecho novedad: tambien antes se empleaba el procedimiento de apremio establecido por regla general. La novedad sobre este punto consiste en las reformas antes indicadas, hechas por la citada instruccion. Respecto á la forma y trámites de dicho procedimiento, véase su artículo especial.

Segun las reglas 1.ª y 2.ª de la citada Real órden de 3 de Setiembre de 1862, para dar principio al procedimiento de apremio, debe librarse por la oficina correspondiente de Hacienda, con el V.° B.° del jefe de la misma, una certificacion del importe del débito, con espresion de las fechas en que se hayan pasado las cédulas de invitacion, consignando con referencia á los libros de cuentas corrientes por ventas no haberse ingresado en tesorería el importe del pagaré; y en su vista el administrador espide el despacho de apremio contra el deudor, en la misma forma que se verifica por los débitos por rentas. Lo propio deberá hacerse en el dia, de conformidad con el art. 2.° de la ley de 19 de Julio de 1869.

El art. 2.° del decreto de 23 de Junio, que estamos examinando, dá por supuesto en su primera parte, que los comisionados de apremio han de percibir de los deudores las dietas que les están señaladas por razon de su cometido. ¿Cuáles son hoy estas dietas? La Real órden de 3 de Setiembre las fijó en su regla 2.ª, estableciendo una escala graduaj de 8 á 24 reales diarios, segun la cuantía de la deuda. Otra escala gradual contiene el artículo 66 de la instruccion de 3 de Diciembre, señalando, tambien segun la cuantía del descubierto, de 3 pesetas á 7, 50 cént. diarias, ó sean de 12 á 30 reales. A esta última tarifa deberán acomodarse en el dia, puesto que se rigen estos procedimientos por dicha instruccion.

En el mismo art. 2.° del decreto de 23 de Junio de 1870 se dispone, que además de las

dietas de los comisionados, «se exigirá el 6 por 100 de interés anual en concepto de demora á los deudores; debiendo aplicarse al Tesoro este recargo, y figurando en las cuentas del mismo como productos eventuales del ramo, que se realizarán al liquidarse el plazo respectivo.» Lo propio estaba mandado como regla general por el art. 15 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850. Justo es que se exija ese interés, como se exije por derecho comun á todo deudor que se constituye en *mora*; pero, aunque el decreto no distingue entre el primer plazo y los sucesivos, lo justo y procedente será aplicarlo solo á los segundos. El rematante que no paga el primer plazo, no es considerado ni tratado como deudor de cantidad líquida; sino como el contratante que falta al cumplimiento de su compromiso, y responsable por tanto de los perjuicios que ocasione. La importancia de estos perjuicios está ya determinada por la ley, y en tal concepto debe abonar la diferencia que resulte entre el primero y el segundo remate, y una multa que no puede bajar de 1,000 reales, como se ha dicho en el §. anterior: no seria justo ni legal exijirle además los intereses. No se halla en el mismo caso el que deja de pagar cualquiera de los plazos posteriores al primero: es un verdadero deudor, que se constituye en *mora*, y debe pagar por consiguiente el interés legal prevenido. Que á estos solamente se refiere la disposicion de que tratamos, se deduce de la referencia que hace el art. 3.° al 164 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, el cual solo habla de los compradores que dejan de satisfacer el dia de su vencimiento cualquiera de los plazos sucesivos al primero.

Segun dicho art. 3.° los intereses de demora deben pagarse, respecto de los plazos y créditos vencidos hasta la fecha del decreto, á contar desde 20 dias despues de la publicacion del mismo; y respecto de los que venzan en lo sucesivo, á contar desde el dia en que sean exigibles, con arreglo al art. 164 antes citado de la instruccion de 1855. Este artículo fué modificado por la disposicion 14 de la Real órden de 24 de Enero de 1867, segun hemos espuesto al principio del presente §.; pero la referencia que ahora se hace á él, parece restablecerlo en su fuerza y vigor. De consiguiente, deberán hacerse en el dia, luego que venza el plazo, las dos invitaciones que aquel previene; y no la única anticipada, que en esta se ordenó. Como de este modo sale perjudicada la Hacienda sin razon que lo justifique, pues segun la Real órden citada los pagarés eran exijibles á los diez dias de su vencimiento, y segun el art. 164 de la instruccion no lo son hasta que trascurran los dos plazos, el primero de 15 dias, y el segundo de 10, que han de darse despues del vencimiento, no será estraño el restablecimiento de la Real órden por declaracion del Gobierno ó por la jurisprudencia. Algun tanto podrá atenuar los efectos de esas dilaciones la disposicion del art. 5.° del propio decreto, por el cual se hace responsables á las administraciones económicas, no solo de la puntual observancia de lo que en él se previene; sino tambien del pago, mancomunadamente con los deudores, de los intereses de demora, si por negligencia ú otras causas dependientes de su voluntad consienten términos más largos en los procedimientos que los que las leyes establecen.

De mas gravedad y trascendencia para los intereses del Tesoro son las disposiciones de los arts. 4.°, 6.° y 7.° del decreto de 23 de Junio. Ya hemos indicado antes que, segun los arts. 164, 165 y 166 de la instruccion de 1855 y la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, en los procedimientos de apremio para hacer efectivos los plazos posteriores al primero, que dejasen de pagar los compradores de bienes nacionales, debian embargarse, en primer lugar, los bienes muebles de más fácil é inmediata realizacion, por el órden establecido en el art. 949 de la ley de Enjuiciamiento civil; en su defecto, los inmuebles que no estuvieran afectos á obligaciones de desamortizacion, y en último término se procedia contra la finca afecta al crédito reclamado, declarándola en quiebra, y procediéndose á su venta por el juzgado especial de Hacienda, el cual aprobaba á su tiempo el remate y adjudicaba la finca al mejor postor, otorgándole la escritura de venta si el deudor

se negaba á su otorgamiento (1). Y la justa razon que para ello se tuvo fué, «que los compradores en este caso son considerados y deben ser tratados como los demás deudores á la Hacienda por cualquier otro concepto.»

Ahora se establece el órden inverso. Segun el art. 4.° del decreto, «el apremio á los deudores por plazos de ventas de fincas y por los intereses de demora se dirijirá siempre contra las adquiridas del Estado, y de que proceda el débito.» Es verdad que se añade que esto se entienda «sin perjuicio de encaminar tambien la accion ejecutiva contra los restantes bienes del deudor, si los hubiere, por el órden establecido en el art. 949 de la ley de Enjuiciamiento civil;» pero como hasta que se venda la finca no puede saberse, ni liquidarse, ni debe exijirse la responsabilidad que resulte contra el comprador quebrado, segun se deduce del art. 9.° del propio decreto, dicho procedimiento de apremio tendrá que suspenderse hasta que se realice la venta. Y miéntras tanto el Estado carecerá de lo que legítimamente le pertenece, aunque el deudor tenga otros bienes de mas fácil realizacion: situacion que puede prolongarse indefinidamente, si hay que repetir las subastas de la finca por falta de postor.

Para que la Hacienda fuese reintegrada de su crédito en la propia forma en que estaba obligado el deudor, se dispuso tambien en la citada Real órden de 3 de Setiembre que cuando, por no haber otros bienes, hubiera de recaer la declaracion de quiebra y procederse á la venta de la finca que fué del Estado, el tipo de la subasta fuese el mayor que resultara entre la tasacion, la capitalizacion, ó el débito por el que se proceda á la venta; y que el rematante deberia satisfacer al contado la cantidad que se hallaba adeudando el comprador primitivo, y el resto hasta lo que ascendiera el remate lo verificaria en tantos plazos iguales, con intervalo de un año, cuantos fuesen los pagarés que faltáran por realizar de la primera venta. Rematada la finca, el nuevo comprador satisfacia al contado el importe del débito, con lo cual percibia la Hacienda desde luego los plazos vencidos, y otorgaba por el resto los correspondientes pagarés: en seguida se hacia la oportuna liquidacion, cargando al primitivo comprador la diferencia entre el primero y el segundo remate y los gastos del apremio y del espediente de subasta: si resultaba diferencia á su favor, se la abonaba el Tesoro; y si en contra, se le exigia por la vía gubernativa de apremio, caso de no satisfacerla al contado.

Separándose el decreto de 23 de Junio de 1870 de este procedimiento, que respetaba á la vez, conforme á equidad y á justicia, los derechos y obligaciones del acreedor y del deudor, ha establecido en sus artículos 6.° y 7.°, que «las fincas del Estado que en adelante sean declaradas en quiebra por falta de plazos sucesivos al primero, se considerarán para los efectos de su nueva venta como no subastadas anteriormente, volviendo por tanto á quedar en la misma situacion que las pendientes de primer remate;» y como consecuencia de esto, que «las operaciones preliminares de tasacion y capitalizacion á que deberán sujetarse, y las subsiguientes de subastas y pagos del precio del remate, se ajustarán á las prescripciones generales de las leyes desamortizadoras, en igual forma que se verifica respecto de las fincas que salen por primera vez á la venta.»

Por consecuencia de este nuevo procedimiento, la Hacienda renuncia al derecho que tiene como acreedor para percibir ante todo el importe de los plazos vencidos, y el de los restantes á su respectivo vencimiento, aceptando en su lugar los plazos, en período mas largo, de la nueva subasta, lo cual equivale á recibir en pago la finca, sin haber intentado antes la cobranza de su crédito por la vía breve y sumaria de apremio que la ley le concede. Se incauta de una finca, que habia enajenado legítimamente, y procede de nuevo á su venta como de cosa propia, sin tener en cuenta ni salvar el inconveniente del registro de la propiedad, en el que aparecerá como

(1) Suprimida la jurisdiccion de Hacienda, se declaró por órden de 5 de Marzo de 1869, que estas subastas deben celebrarse ante los jueces de primera instancia, reservándose la aprobacion del remate á la Junta superior de ventas, como en las demás subastas.

dueño el comprador (1). Si se supone que la venta quedó rescindida y sin efecto por la falta de pago, podrá objetarse que no se estipuló en ella tal condicion rescisoria. Podrá tambien invocar el comprador el derecho consignado en el artículo 13 de la Constitucion de 1869, puesto que se le priva de su propiedad y derechos, no en virtud de sentencia judicial, pues ni aun el juez de paz interviene en ello; sino por la misma Hacienda de su propia autoridad, representada por la administracion económica. Y todo, además, con perjuicio de la Hacienda y sin beneficio para el deudor. Y como si no bastara todo esto, por el art. 13 se declaran sin efecto alguno los remates celebrados de fincas en quiebra, cuyas adjudicaciones no se hubieren acordado por la Junta superior de ventas á la fecha del decreto, dándole así efecto retroactivo.

Sentado el principio de que las fincas declaradas en quiebra por falta de pago de plazos posteriores al primero vuelven á quedar en la misma situacion que las pendientes de primer remate, y sujetas por tanto á todas las operaciones de tasacion y subasta en igual forma que se verifica respecto de las que salen por primera vez á la venta, se siguen dos consecuencias que establece el art. 8.° del propio decreto: 1.° que caso de no haber postor en la primera subasta, deben verificarse la segunda y ulteriores hasta conseguir la venta, bajo los tipos y en la forma que esplicamos en el §. 7.° de la seccion III; y 2.° que en pago del precio de estas ventas son admisibles por todo su valor nominal los bonos del tesoro, creados en 28 de Octubre de 1868, segun se espuso al final de la seccion V.

Respecto de este punto, por órden del Regente de 7 de Noviembre de 1869 se declaró, que un segundo comprador no tenia derecho á que se admitiera en bonos del tesoro el importe de los pagarés, cuya falta de pago produjo la declaracion de quiebra de la finca, no obstante haber celebrado su contrato con posterioridad á la fecha de la creacion y admision de los bonos, en razon á que en tales casos los segundos rematantes tienen la misma personalidad jurídica que los primeros, y están por tanto obligados á cumplir el contrato que estos celebraron, en cuanto á los plazos vencidos, sin variacion alguna, conforme á lo prevenido en la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, é impuesto como condicion en los anuncios de la subasta. Son notables los considerandos de dicha órden, que pueden verse en la seccion I de la *parte legislativa*, por cuanto esplican y justifican el sistema de la de 3 de Setiembre, derogado por el decreto de que tratamos. Despues de esta reforma, ya no hay inconveniente para la admision por todo su valor nominal de los bonos del Tesoro, que parece haber sido su principal objeto.

Segun el art. 9.° del mismo decreto, los primitivos compradores de las fincas que se declaren en quiebra por no pagar los plazos sucesivos al primero, quedan responsables á satisfacer las diferencias que resulten entre el precio del primer remate y el que se obtenga en la subasta en quiebra, así como tambien las que en su caso resulten, si este no se pagase en metálico, y sí en bonos del Tesoro ú otra clase de papel, entre el valor de los mismos á precio de cotizacion del dia de su entrega en caja y el de emision de estas clases de valores públicos. Como nada de esto puede saberse hasta que tenga efecto la subasta en quiebra, será indispensable esperar á que esta se verifique para exigir dicha responsabilidad, segun antes hemos indicado. Entonces se formará la liquidacion correspondiente, cargándole tambien al deudor los intereses de demora, y abonándole, aunque nada se dispone sobre ello, el importe de los plazos que hubiere satisfecho, y se espedirá el apremio por la cantidad líquida que resulte contra él, si no la satisface en el acto; así como le abonará el Tesoro la diferencia que pueda resultar á su favor.

(1) No parece aplicable á este caso el art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, por no estar prevenido que á la declaracion de quiebra y nueva venta de la finca preceda la resolucion gubernativa de la rescision ó nulidad de la primera venta; circunstancia indispensable para que pueda hacerse la inscripcion de dominio á favor del Estado en el registro de la propiedad.

Además, deben satisfacer los compradores quebrados el gasto que ocasionen las nuevas tasaciones de las fincas: así lo dispone el artículo 12 del citado decreto. Vendiéndose estas fincas como si salieran por primera vez á subasta, parecia lo procedente se siguiera la regla general de que el comprador pagase todos los derechos del espediente, inclusos los de tasacion, quedando solamente los del apremio á cargo del primer rematante. Esa escepcion dificultará las nuevas tasaciones, ó perjudicará á los peritos, porque debiendo percibir estos sus derechos directamente de los compradores, segun el decreto de 22 de Diciembre de 1868, no será fácil puedan realizarlos del que ha dado lugar á la declaracion de quiebra y sus consecuencias.

Todo comprador quebrado tiene derecho á que se suspendan los procedimientos de apremio y contra la finca objeto de la quiebra, siempre que antes del remate de esta, y de los demás bienes en su caso, satisfaga los pagarés que tenga en descubierto, los intereses de demora y los gastos ocasionados. Así lo dispuso la Real órden de 3 de Setiembre de 1862 en su regla 14. y es conforme á lo que previene la instruccion de 3 de Diciembre de 1869 sobre el procedimiento de apremio.

Indicarémos, por último, que cuando los pagarés de bienes nacionales no obren en el Tesoro, por estar negociados, por hallarse en la Caja de depósitos, donde deben estar los de corporaciones civiles, ó por otro motivo, no dejarán por esto las administraciones económicas de dar los correspondientes avisos, ni de conminar con los apremios. Al efecto reclamarán las noticias que necesiten de quien pueda suministrarlas, y se les remitirán los pagarés con la nota de protesto por falta de pago (1).

SECCION VII.

DEL DERECHO DE TANTEO EN LAS VENTAS DE BIENES NACIONALES.

En los artículos RETRACTO y TANTEO corresponde tratar esta materia en general, y allí puede verse: aquí nos limitaremos á lo que se refiere concreta y especialmente á las ventas de bienes nacionales.

La regla general es que en esta clase de ventas no tiene lugar el derecho de tanteo ó retracto, siendo por tanto inadmisibles las demandas que á este fin se dirijan. En Real órden de 27 de Abril de 1860 se hizo esta declaracion, fundándose; 1.°, en que por el artículo 53 de la instruccion de 1.° de Marzo de 1836 así se previno, escluyéndose espresamente el referido derecho y todo recurso de preferencia: 2.°, en que, habiéndose prohibido por el art. 170 de la de 31 de Mayo de 1855 la admision de demandas de lesion ú otras que tendieran á invalidar las ventas, estaban comprendidas implícitamente en el mismo las de tanteo y retracto, por cuanto de hecho y de derecho anularian el contrato celebrado por la Administracion con los rematantes de las fincas; y 3.°, en que la compra de las fincas sin tomar parte en la licitacion es contraria á la forma establecida en la ley de 1.° de Mayo de 1855, y en tal concepto prohibida por el art. 29 de la misma.

A pesar de estas razones, que no impugnamos por no conducir á nuestro propósito, y prescindiendo del *retracto gentilicio*, que no puede tener cabida en estas ventas, es incuestionable la conveniencia del de *comuneros ó condueños*, atendidas las condiciones de la propiedad territorial en España, y muy especialmente de la que perteneció á manos muertas civiles y eclesiásticas. Existen muchas fincas, cuyo suelo pertenece á un dueño y el arbolado á otro ó á un comun de vecinos: otras, cuyos productos se utilizan por partes alícuotas ó alternativamente: estensos territorios dados á enfitéusis. ¿Puede ponerse en duda la conveniencia pública y particular de consolidar los dominios en tales casos? Así lo demostró la esperiencia, y vino por último á introducirse un artículo en la ley de 15 de Junio de 1866, que trata de la redencion de censos, para autorizar el derecho de tanteo de los condueños.

Segun el art. 9.° de dicha ley, «en las enajenaciones que verifique el Estado de la par-

(1) Art. 22, núm. 10 de la instrc. de 11 de Julio de 1856, y dispos. 15 de la Real órden de 25 de Enero de 1867.

te que le corresponda en fincas cuyo dominio se halle dividido, tendrá el derecho de tanteo el condueño; y si fueren varios, el que lo sea de mayor porcion, pasando, en caso de no ejercitarlo, al inmediato porcionero. Este derecho se reclamará dentro de los nueve dias siguientes al acto del remate ante cualquiera de los juzgados que haya intervenido en la subasta.»

No se pone, pues, limitacion al retracto de comuneros. Siempre que se halle dividido el dominio de una finca, ya sea rústica ó urbana, y en cualquier forma que sea, cuando el Estado venda la parte que le corresponde, puede el condueño utilizar el derecho de tanteo para adquirirla por el precio en que haya sido rematada, abonando además los gastos que sean de cuenta del rematante, en cuyo lugar se sustituye. Si son varios los condueños, tiene preferencia el de mayor porcion; y el que le siga en órden, si aquel no ejercita su derecho, y así de los demás. Pero esto deberá entenderse para el caso en que los condueños lo sean en comun, y no de partes determinadas. Si se vende, por ejemplo, el dominio útil de una finca, y son varios los que tienen el dominio directo sobre toda ella, como suele suceder en los foros y subforos, podrá ejercerse por todos el derecho de tanteo con la preferencia que les dá la ley; pero si el dominio directo está dividido de suerte que á cada interesado corresponde el de una parte determinada de la finca, entonces, como no hay dominio en comun de estos entre sí, cada cual podrá tantear la parte de la finca que le corresponda, que es lo único á que tiene derecho. Las cuestiones que sobre este punto se susciten, habrán de resolverse por el derecho comun y por los tribunales ordinarios, como luego diremos.

Téngase presente, que el plazo de nueve dias, que de acuerdo con la legislacion comun se concede para utilizar ese derecho, es uno solo, á contar desde el dia del remate, y por tanto comun para todos los porcioneros. De consiguiente, todos los que quieran aprovecharse de tal derecho deberán presentar su demanda dentro de dicho término, y acumuladas todas las demandas se dará la preferencia al que tenga mayor porcion de los que hayan acudido en tiempo. El retrayente tendrá que reconocer y respetar el derecho que los otros condueños tengan sobre la finca.

Como los enfiteusis tienen el carácter de censos, los enfiteutas pueden redimir el dominio directo conforme á las disposiciones especiales sobre redencion de censos; pero si no hicieron uso de este derecho, y procede el Estado á la enajenacion del dominio directo, podrán utilizar el derecho de tanteo para adquirirlo y consolidar los dos dominios.

Aunque la ley confirió espresamente á cualquiera de los jueces de las subastas la competencia para conocer de estas demandas de tanteo, ocurrió la duda de si, siendo una incidencia de la venta, deberian resolverse definitivamente por aquellos ó por la Administracion. Esta duda se resolvió por Real órden de 13 de Agosto de 1868, declarando, de acuerdo con el parecer de las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y de la Direccion general del ramo, que «corresponde esclusivamente á los tribunales ordinarios el conocimiento y resolucion de las demandas de tanteo que se entablen con arreglo al citado art. 9.° de la ley de 15 de Junio de 1866, sin que sea necesaria su decision prévia en la vía gubernativa, ni que se entorpezca por esto el curso del espediente de subasta, que deberá seguir su tramitacion en las oficinas hasta posesionar al rematante, prévios los requisitos exijidos por las instrucciones vigentes.»

Fúndase esta resolucion en que, «al ejercitarse el derecho de tanteo, necesariamente se ha de fundar en títulos anteriores á la subasta, razon por la cual no pueden estimarse estas demandas como incidencias de la venta, sino como cuestion de propiedad, cuyo conocimiento incumbe esclusivamente á los tribunales de justicia;» y en que «entablándose dichos recursos contra el comprador de la finca, y no contra el vendedor, segun lo que prescribe la ley de Enjuiciamiento civil, el Estado, que es quien enajena, no tiene interés alguno en su resolucion, por lo que tampoco es necesaria la reclamacion guber-

nativa á que se refiere el art. 173 de la Real instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

De estos fundamentos se deduce además, que fuera de la competencia atribuida á cualquiera de los jueces que haya intervenido en la subasta, y de que el término de los nueve dias para interponer el recurso ha de contarse desde el dia del remate, y no desde el otorgamiento de la escritura de venta, en todo lo demás han de interponerse y sustanciarse estas demandas conforme á lo prevenido para los retractos en el título XIII de la 1.ª parte de la ley de Enjuiciamiento civil. Véase, por consiguiente, el artículo **RETRACTO**.

En la resolucion últimamente indicada no se ha hecho mérito de un caso especial, que habrá de regirse por tanto por sus disposiciones especiales. Nos referimos á la venta de pequeñas parcelas ó porciones de terreno, que por sí solas no pueden formar solares de los ordinarios para edificar en las poblaciones. Por el art. 2.º de la ley de 17 de Junio de 1864 se concedió el derecho de tanteo á los propietarios colindantes, dentro de nueve dias á contar tambien desde el de la subasta, siempre que el rematante no reuna dicha circunstancia. Y por el art. 15 de la instruccion de 20 de Marzo de 1865 para el cumplimiento de dicha ley, se dispuso que la declaracion de este derecho de tanteo se hará por medio de espediente á instancia de parte, con audiencia del rematante, cuyo espediente será resuelto por la Junta superior de ventas, á la que se remitirá por conducto de la Direccion, con informe de la administracion, fiscal de Hacienda y junta provincial. Así habrá de seguir practicándose, mientras otra cosa no se disponga, por no haberse comprendido este caso, como debiera, en la Real órden citada de 13 de Agosto de 1868.

SECCION VIII.

DE LA SUBROGACION EN HIPOTECAS ESPECIALES DE LAS GENERALES Á QUE ESTÉN AFECTOS LOS BIENES NACIONALES PUESTOS EN VENTA.

En el §. 9.º de la seccion III se trató de la liquidacion de cargas, refiriéndonos á las reconocidas con anterioridad á la venta y que gravitan sobre finca determinada, y reservamos para este lugar el tratar de las que están afectas mancomunadamente á varias fincas ó á una universalidad de bienes. Siendo justo, por una parte, asegurar el pago de estas cargas, cuando son legítimas y reconocidas, y conviniendo, por otra, reducir el gravámen á fincas determinadas para poder enagenar como libres las restantes, se han dictado con este objeto varias disposiciones. Y se ha hecho más necesaria esta medida despues de la Ley Hipotecaria, mediante á que no son permitidos por ella esos gravámenes generales, que deben subrogarse ó convertirse en hipotecas especiales.

Aunque esta materia sea independiente del contrato de que tratamos, debemos esponerla en este lugar para comprender en el presente artículo todo lo que se relaciona con la compra-venta de bienes nacionales. A la entrega de las fincas á los compradores ha de preceder la liquidacion de cargas, y cuando estas pesan mancomunadamente sobre varias de aquellas ó sobre una universalidad de bienes, no seria posible llenar ese requisito ni aun realizar la venta con las condiciones establecidas sobre cargas, sin determinar préviamente las fincas que han de quedar gravadas, ó la responsabilidad de cada una de ellas. Que en tales casos no debe procederse á la subasta mientras no quede hecha la sobrogacion de hipotecas, lo disponen los arts. 30 y 31 de la ley y 27 de la instruccion de 11 de Julio de 1856, segun declaracion hecha por el Consejo de Estado en Real decreto-sentencia de 21 de Julio de 1865. Y si en algun caso se han vendido como libres, ó sin preceder dicha subrogacion, los bienes afectos á tales cargas, se han suscitado cuestiones sobre la validez de la venta, con notorio perjuicio del Estado y de los particulares. A falta de otras razones, esto solo bastaria para justificar nuestro método de esponer aquí dicha materia.

En las leyes desamortizadoras hasta la de 1.º de Mayo de 1855 inclusive, ni en la instruccion para llevarla á efecto, no se previó el caso concreto de que tratamos. Las primeras disposiciones sobre esta materia se hallan

en la ley de 13 de Febrero y en la ley é instruccion de 11 de Julio de 1856, esplicadas por la Real órden de 3 de Mayo de 1860.

Por el art. 13 de aquella ley se dispuso, entre otras cosas, que los censos pertenecientes á particulares, que gravitan mancomunadamente con hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, ó sobre dos ó mas del mismo, se admitiesen en pago de las fincas que se vendieran y fueran parte de la hipoteca; pero esto quedó derogado por los arts. 30, 31 y 32 de la ley de 11 de Julio de 1856, como se declaró por el 1.° de la Real órden de 3 de Mayo de 1860. En estas disposiciones se optó por la subrogacion de la hipoteca, y vamos á esponer lo que conforme á ellas y á las demás vigentes debe hacerse para realizarla, esplicando los casos y forma de la subrogacion y el procedimiento gubernativo que ha de emplearse.

§. 1.° *Casos y forma de la subrogacion.*

No solo los censos (escepto los enfitéuticos), y demás gravámenes perpétuos, sino tambien los créditos con plazo fijo para su devolucion, están comprendidos en el caso de subrogacion de hipoteca, siempre que graviten mancomunadamente con hipoteca especial sobre varios ó todos los bienes de cualquier pueblo ó corporacion. Estos gravámenes no impiden que las fincas á ellos afectas se vendan detallada y libremente; pero los censualistas y acreedores pueden elegir, y deben hacerlo antes de la subasta, la finca ó fincas que tengan por mas conveniente, y cuyo valor en tasacion cubra la cantidad á que ascienda su crédito, y un 20 por 100 mas, para afectar sobre ellas la responsabilidad del pago (1). Para este efecto deben capitalizarse los censos al 5 por 100 de sus réditos ánuos, y los créditos hipotecarios con plazo fijo para la devolucion por el mismo capital íntegro que resulte de la escritura de imposicion, á no ser que en esta se hubiere pactado otra cosa (2).

Las demás cargas de que no fueren única hipoteca dos ó mas fincas enajenables, sino el conjunto de recursos de los establecimientos y corporaciones obligadas al pago, así como los censos concejiles, pueden tambien trasmitirse sobre una finca determinada, siempre que la corporacion ó establecimiento respectivo convenga en ello, la carga resulte legítima y subsistente, y el acreedor lo acepte por su parte. En este caso se hará tambien la capitalizacion de la carga al 5 por 100 de su rédito anual, si el tipo primitivo á que se hubiere constituido no fuese mayor, considerándose como tanto de la carga la cantidad á que hoy se halle reducida, cualquiera que haya sido en otro tiempo su importancia. Si no hubiere el acuerdo antes indicado para esta subrogacion, quedarán gravando las cargas sobre las inscripciones de la deuda pública, que se emitan á favor de las corporaciones ó establecimientos respectivos en equivalencia de sus fincas, y sobre los recursos de otra clase á que con arreglo á las escrituras de imposicion tengan derecho los acreedores (1).

Nótese bien la diferencia que existe entre los dos casos que acabamos de esponer. En el primero se supone la constitucion de una hipoteca especial sobre varias fincas gravadas mancomunadamente: el segundo se refiere al caso en que la hipoteca es general sobre todos los bienes, ó sobre el conjunto de recursos de la corporacion ó establecimiento obligado al pago. Por esto en aquel tiene el acreedor el derecho de elegir la finca que mas le convenga de las especialmente hipotecadas, ó cualquiera otra, si estas se hubieren enajenado, segun luego diremos, y se lleva á efecto la subrogacion de la hipoteca aun contra la voluntad del deudor; pero en el segundo, como no hay hipoteca especial, para constituirla es indispensable que convenga en ello la corporacion deudora, y que la acepte tambien el acreedor, y además que haya fincas sobre que pueda imponerse el gravámen: de otro modo queda subsistente el primitivo contrato, y si se han vendido todos los bienes obligados generalmente, el acreedor puede ejer-

(1) Art. 30 de la ley de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 13 de la ley de 27 de Febrero de 1856, y 2.° de la Real órden de 3 de Mayo de 1860.

(1) Disp. 7.ª y 8.ª de la R. órden antes citada.

cer su derecho sobre las inscripciones de la deuda, emitidas en equivalencia de los mismos (1).

Hecha y aprobada la subrogacion de la hipoteca por los trámites que luego espondremos, cuando esta recaiga en fincas enajenables, se procederá á su venta, con el gravámen á que quedan afectas, siendo su pago de cuenta del comprador, lo cual se espresará en los anuncios. En su consecuencia, al practicarse la liquidacion de cargas despues de la subasta, se rebajará el importe del crédito del precio del remate, capitalizando los censos y cargas perpétuas al 5 por 100, y los créditos hipotecarios por todo su valor, como se ha dicho (1).

Los acreedores debieron pedir la subrogacion de la hipoteca en el mes siguiente á la publicacion de la instruccion de 11 de Julio de 1856, y para el caso de no hacerlo, se previno á los gobernadores pasaran todos los antecedentes al juez de primera instancia del partido, para que, oyendo sumariamente á las partes, verificase la designacion de la finca ó fincas en el término improrogable de 20 dias (2). Sin embargo, no se les ha considerado decaidos de su derecho por el trascurso de dicho término sin haber incoado el espediente; pero en el caso de haber sido enajenadas como libres las fincas sobre que pesaba el gravámen en comun, tienen que respetar la venta y aceptar otra forma de pago.

Para este caso está prevenido que, si despues de enajenadas todas las fincas afectas en mancomun á un censo ó crédito hipotecario, fuesen estos reclamados, se haga la subrogacion de la hipoteca sobre otra finca de las que tenga la misma corporacion ó establecimiento, que no estuviere gravada; y si no existiese finca alguna sobre qué hacer la subrogacion, quede esta hecha sobre la masa de inscripciones de la deuda pública que la corporacion ó establecimiento respectivo recibiere como producto de la enajenacion de sus fincas, dándose en este caso conocimiento á la Direccion general de la deuda, á fin de que haga las anotaciones correspondientes (3).

Dos disposiciones legislativas posteriores han hecho dudar de la eficacia de las que quedan espuestas, por aparecer inconciliables en algun estremo. La una es la ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1861, en cuanto prohibe (art. 108, núm. 4.°) imponer hipotecas

(1) *Sentencia de la Sala* 3.ª *del Trib. Sup. de Justicia de* 23 *de Octubre de* 1869. El acreedor pidió el reconocimiento de varias cargas con hipoteca general sobre los bienes raices de un pueblo, y designó una finca ya vendida para subrogar la hipoteca. Se accedió á su pretension, y se anuló la venta de la finca por falta de conformidad del comprador en aceptar la carga. Se opuso el ayuntamiento interesado, y por dicha sentencia se ha dejado sin efecto la Real órden, y declarado válida la venta, sin perjuicio de los derechos del acreedor, por los motivos siguientes:

«Considerando que el derecho que, segun el artículo 30 de la ley de 11 de Julio de 1856, corresponde á los acreedores censualistas para elegir entre varios ó todos los bienes de un pueblo la finca que tengan por conveniente á fin de gravarla con la responsabilidad de su crédito, se limita á los casos en que la hipoteca sea especial:

Considerando que si bien por la escritura de trueque ó permutacion y censo perpétuo, formalizada entre D. Hernando de Robles y el concejo y vecinos de Quintanilla de Trigueros en 10 de Noviembre de 1555, aparecen obligados al gravámen en ella establecido todos los bienes raices, propios y rentas de la mencionada villa, habidos y por haber, no resulta constituida por ese documento hipoteca alguna especial, y que tampoco consta la inscripcion que en caso afirmativo debió verificarse en el correspondiente registro:

Considerando que el referido censo, atendida su índole, no puede menos de calificarse de reservativo; y que en tal concepto, no siendo el monte llamado *Carrascal* una de las fincas de que en 1555 se desprendió D. Hernando, no hubo derecho á designarle como hipoteca afecta especialmente á ese contrato:

Y considerando que, enajenadas como libres todas las fincas de Quintanilla, y rehusada por sus compradores la aceptacion del gravámen reclamado, no pudo accederse á la solicitud del Conde de Castroponce, y ha de estarse á lo prevenido en la Real órden de 13 de Junio de 1866, segun la cual, en los casos en que no existan bienes de propios para la subrogacion de los censos, ha de procederse á su redencion, entregando á los censualistas una cantidad en títulos del 3 por 100 consolidado suficiente á producir la misma renta que venian percibiendo.»

(1) Arts. 32 de la ley y 27, n.° 3.° de la instruccion de 11 de Julio de 1856, y 5.° de la Real órden de 3 de Mayo de 1860.

(2) Arts. 31 de la ley y 27, n.° 1.° de la instruccion citada.

(3) Disp. 4.ª y 6.ª de la Real órden citada de 3 de Mayo de 1860.

sobre efectos públicos y marcadamente sobre las inscripciones de la deuda. La otra, la ley de 15 de Junio de 1866, la cual dispone en su art. 10, que «los capitales de censos que correspondan á particulares ó corporaciones esceptuadas de la desamortizacion, y graviten sobre fincas sujetas á esta, *son y seguirán siendo respetados con arreglo al derecho comun y á las escrituras de imposicion.*»

En cuanto á la primera, su prohibicion es absoluta y terminante. Si no pueden constituirse hipotecas sobre las inscripciones ó títulos de la deuda pública, es claro que hoy no puede tener efecto la subrogacion antes indicada sobre las pertenecientes á las corporaciones ó establecimientos, cuyos bienes hayan sido enajenados en su totalidad. Reconociéndolo así el Gobierno, en dos casos particulares, para salir del conflicto, se dispuso que se entregase á los acreedores de los censos una cantidad de títulos del 3 por 100 consolidado, suficiente á producir la misma renta que percibian anteriormente, rebajándose el capital que se entregase de la masa de inscripciones de la deuda pública, que deba recibir la corporacion obligada por el producto de los bienes que formaban la hipoteca del censo. Así se resolvió por Reales órdenes de 15 de Junio de 1866 y 14 de Enero de 1868.

Que es equitativa dicha resolucion, es incuestionable; pero tambien lo es que solo puede aceptarse por via de transaccion. Así es que en la última de las Reales órdenes citadas, al disponerse que se aplique como medida general á todos los casos que ocurran de igual naturaleza, se añade: *siempre que presten su asentimiento los interesados.* Y no podia ser de otro modo, por la razon que se espone en el último considerando de la propia Real órden, que se ha insertado en la seccion 1.ª de la *parte legislativa.*

Pero no se ha dispuesto lo que haya de hacerse en el caso de que el censualista se niegue á recibir los títulos de la deuda, como podrá suceder teniendo en cuenta que, si bien se asegura la renta, y que el valor nominal que estos representan será igual al capital del censo, caso de que haya sido impuesto al 3 por 100, quedará este reducido á una cuarta parte próximamente si aquellos se realizan al precio de cotizacion. En tal caso, acogiéndose el censualista á la declaracion hecha en el artículo 10 antes citado de la ley de 15 de Junio de 1866, de que estos capitales están bajo la salvaguardia del derecho comun y de las escrituras de imposicion, podrá reclamar que se reconozca el gravámen sobre las fincas á que estaba efecto; y si estas fueron enajenadas como libres, el Estado deberá indemnizar al comprador, ó declararse la nulidad de la venta. Dicha reclamacion, como de derecho comun, debe ser de la competencia de los tribunales ordinarios, prévia la via gubernativa conforme al art. 175 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Y aun nace otra cuestion del propio art. 10 de la citada ley. ¿Si estos capitales de censos están bajo la salvaguardia del derecho comun y de las escrituras de imposicion, podrán capitalizarse al 5 por 100, como está prevenido y se ha dicho anteriormente, para los efectos de la subrogacion de la hipoteca? Creemos que no, en cuanto al censualista, si no presta su asentimiento, puesto que no puede ser privado de su derecho á todo el capital impuesto, cuando el censatario quiera redimirlo; pero el comprador de la finca hipotecada estará obligado á pasar por esa capitalizacion para rebajar su importe del precio del remate, sin perjuicio de los derechos del censualista, toda vez que se haya anunciado y él lo haya aceptado como condicion de la subasta. El censualista no puede oponerse á esto en razon á que, no pudiendo exigir la redencion y pago del capital del censo, ningun perjuicio se le sigue, toda vez que se le conserva íntegra la pension ó réditos, que es lo único á que tiene derecho, y asegurado el pago con igual garantía de hipoteca especial, como tiene declarado el Consejo de Estado (1).

(1) *Real decreto-sentencia de 29 de Diciembre de 1866*, cuyos *considerandos* 2.º y 4.º dicen así:—«Considerando que la capitalizacion de los censos, que son objeto de una subrogacion de esta clase (*la de hipoteca mancomunada de varias fincas por una especial*), debe necesariamente girar sobre el tipo de 5 por 100 señalado en la última

Puede suceder que no haya posibilidad de verificar la subrogacion de las hipotecas, por que siendo varios los créditos con hipoteca especial mancomunada sobre unas mismas fincas, la suma total de aquellos iguale ó esceda el importe en tasacion de todas estas. Para ese caso dispone el art. 33 de la ley de 11 de Julio de 1856, que se proceda sin embargo á la venta de las fincas, quedando su importe en la Caja de depósitos hasta que los acreedores ventilen sus derechos de preferencia en la forma que establecen las leyes. Esto es lo justo y legal tratándose de créditos exigibles á cierto plazo, á los cuales se refiere sin duda dicha disposicion; pero no respecto de los censos. Estando éstos bajo la salvaguardia del derecho comun y de las escrituras de imposicion, como se ha dicho, no pueden ser privados de la garantía de su hipoteca, ni pueden venderse las fincas sin el gravámen á que están afectas.

Tambien puede suceder que las cargas que pesan sobre una finca, sean á favor de una misma persona, y escedan del valor de su tasacion ó capitalizacion. En este caso, segun el art. 34 de la ley citada, debe sacarse la finca á pública subasta; si no se presenta postor en la primera, se repetirá un segundo remate; y si tampoco hubiese postor, se adjudicará al acreedor.

La subrogacion de hipoteca, espuesta anteriormente, no puede tener lugar respecto de los censos enfitéuticos. Como en estos cada finca, y aun cada porcion de ella, responde de la renta ó cánon por la cual el dueño cedió el dominio útil, reservándose el directo, no cabe la responsabilidad mancomunada, ni de consiguiente la subrogacion de garantía para el pago. No pueden por tanto considerarse comprendidos dichos censos en el caso del artículo 30 de la ley de 11 de Julio de 1856: lo están en el del art. 29, una vez que cada finca responde solo de la carga que sobre ella gravita, cuyo capital debe rebajarse de precio del remate, en la forma que ya se esplicó al tratar de la liquidacion de cargas (1).

§. 2.° *Procedimiento gubernativo para la subrogacion.*

En el art. 27 de la instruccion de 11 de Julio de 1856 y en la Real órden de 3 de Mayo de 1860 se dictaron reglas para la instruccion y resolucion de los espedientes gubernativos, que tengan por objeto la subrogacion de hipotecas en los casos de que tratamos. Aunque posteriormente en la ley Hipotecaria (arts. 383 á 388) se ha fijado el procedimiento que ha de seguirse para tales subrogaciones, como éste es para los casos en que, por falta de avenencia entre los particulares, haya de acudirse á la autoridad judicial, no creemos que haya sido derogado el gubernativo que vamos á esponer.

Los censualistas y tenedores de créditos con hipoteca mancomunada sobre todos ó varios de los bienes de cualquiera pueblo ó corporacion, que quieran obtener la subrogacion de sus hipotecas, deben acudir con su solicitud á la administracion económica de la provincia, presentando las escrituras ú obligaciones hipotecarias que legitimen sus derechos, y designando la finca ó fincas sobre que deseen afectar la responsabilidad del censo ó crédito, á tenor de lo prevenido en el art. 30 de la ley de 11 de Julio de 1856. De esta solicitud se dá audiencia á la corparacion ó establecimiento obligado al pago, y se hace cons-

parte del art. 13 de la ley de 27 de Febrero de 1856, ó sea el 5 por 100 del rédito ánuo de aquellos, conforme á la terminante disposicion de la citada Real órden de 3 de Mayo de 1860:—Considerando que no siendo segun derecho exigible por parte del acreedor censualista la redencion y pago del capital de los censos, conforme se ha declarado en Reales decretos-sentencias de 16 de Mayo y 25 de Julio de 1865, ningun perjuicio cierto se ha irrogado al Marqués de Ayerve ó á sus herederos con la capitalizacion indicada, por cuanto teniendo únicamente derecho al pago de los réditos que se viene percibiendo, este pago se les asegura con igual garantía de hipoteca especial.»

En el 5.° considerando se establece, que estando autorizado el Gobierno por el art. 43 de la ley de 11 de Julio de 1856 para resolver las dudas que puedan ocurrir sobre la inteligencia y aplicacion de las leyes de desamortizacion, no son reclamables por la vía contencioso-administrativa las resoluciones de carácter general que dicte con dicho objeto, como lo es la Real órden de 3 de Mayo de 1860.

(1) Real órden de 18 de Octubre de 1862.

tar por certificaciones del secretario de la misma corporacion y de las oficinas de la administracion donde presente sus presupuestos y cuentas anuales, que en estos documentos y en los libros cabreos constan las obligaciones censales ó hipotecarias de que se trata, y los réditos correspondientes. Resultando acreditado el derecho del reclamante, se practican las operaciones necesarias para la subrogacion de la hipoteca, que deberán ser, el justiprecio de la finca elegida y la justificacion de que ésta pertenece á la corporacion ó establecimiento obligado al pago; despues emite su dictámen el promotor fiscal, y con el informe de la junta provincial de ventas, se remite el espediente á la superior para su resolucion.

Para estas solicitudes se concedió el plazo de un mes desde la publicacion de la instruccion de 11 de Julio de 1856; pero ya se ha dicho, que no por esto han perdido su derecho los interesados. Cuando estos no lo soliciten, debe el jefe económico pasar todos los antecedentes al juez de primera instancia del partido, para que, oyendo sumariamente á las partes, verifique la designacion de la finca ó fincas en el término improrogable de 20 dias, siendo en tal caso de cuenta de los causantes el pago de las diligencias del juzgado y demás gastos que fuere preciso hacer para llevar á efecto oficialmente la subrogacion.

Aprobada ésta, es indispensable consignarla en escritura pública, pues de otro modo no tendria valor la nueva hipoteca, ni podria inscribirse en el registro de la propiedad, conforme á lo prevenido en la ley Hipotecaria. No está determinado espresamente el funcionario á quien corresponde el otorgamiento de estas escrituras á nombre del Estado: habiéndose atribuido por la ley esta facultad á los jueces de primera instancia, tanto en las ventas como en la redencion de censos, parece procedente que la misma autoridad otorgue las escrituras de subrogacion de hipotecas.

SECCION IX.

DE LAS INCIDENCIAS DE VENTAS DE BIENES NACIONALES.

Se dá el nombre de *incidencias de ventas* á todas las reclamaciones y cuestiones que se suscitan con ocasion ó á consecuencia de las enajenaciones de bienes nacionales, para invalidarlas ó modificar sus efectos legales, ya se promuevan por los compradores, ya por parte del Estado como vendedor, ó bien por un tercero. Establecida y usada oficialmente esa enunciativa, debemos atenernos á ella para tratar bajo su epígrafe en la presente seccion de todas las indicadas cuestiones.

Acerca de ellas, el ilustrado Director que fué del ramo D. Juan de la Concha Castañeda, en una *memoria*, que en 27 de Junio de 1868 presentó al Ministro de Hacienda, haciéndose cargo de la necesidad de reducir las incidencias á lo que realmente deben ser, limitándolas á esplicar el contrato y designar la cosa vendida, y dejando á los tribunales las demás cuestiones, decia lo siguiente: «Son las incidencias, Excmo. Sr., la rémora mas constante de la desamortizacion. Ellas dan vida á multitud de reclamaciones; y habiendo sido objeto de diversas medidas, han creado tantas y tan varias cuestiones, que su estudio no puede considerarse jamás suficientemente hecho.» Y con efecto: ¿quién puede prever los medios y recursos que el interés particular, auxiliado no pocas veces por la mala fé, puede sugerir á los compradores, á quienes convenga anular la venta ó rebajar el precio?

Y no es difícil señalar las causas de estos males. Es un hecho frecuente que se rematan muchas fincas por doble, triple y aun mas de su valor. Por empeño temerario unas veces, por conveniencia mal calculada otras, y no pocas con miras reprobadas, se puja en las subastas inconsideradamente: despues viene el arrepentimiento, y se busca el medio de eludir el compromiso. Para esto se cuenta con la oscuridad ó insuficiencia de la ley, y con la flexibilidad y condescendencia de la Administracion; y como no se devengan costas en el espediente gubernativo, se entabla la reclamacion. De aquí esa multitud de cuestiones, *cuyo estudio no puede considerarse jamás suficientemente hecho*, como se dice en la citada *memoria* con el convencimiento que produce el exámen diario de los negocios.

Y si esto decia el que por deber y con notoria suficiencia estaba dedicado al estudio y resolucion de esas cuestiones, ¿qué no sucederá al jurisconsulto que, concretándose al derecho constituido, no puede tener otro guia que la ley y la jurisprudencia, examinadas y aplicadas con su recto criterio? Y ya hemos indicado que la ley es oscura é insuficiente, pues no ha previsto ni podia prever todos los casos, y si contiene alguna regla de aplicacion general, suele estar contrariada por otra; y la jurisprudencia se vá formando casuísticamente con la resolucion de casos particulares, no siempre examinados y decididos con un mismo criterio. De estas resoluciones solo son conocidas las que se dictan por el Gobierno con carácter general, y que se han insertado en la *parte legislativa* de este artículo, y las contenidas en las sentencias del Consejo de Estado, hoy de la Sala 4.ª y antes de la 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia, que ha reemplazado á la de lo contencioso de aquel.

De estos datos y de los principios generales del derecho tenemos que partir para esplicar la materia que es objeto de la presente seccion. Examinaremos con la separacion conveniente las causas que dan lugar á la nulidad de la venta, y los casos en que, quedando ésta subsistente, procede la indemnizacion de perjuicios; los efectos que produce dicha nulidad; la competencia para conocer de estas cuestiones, y los procedimientos y recursos que en ellos pueden utilizarse.

§. 1.° *Nulidad de la venta, y sus efectos.*

El derecho comun distingue entre la *nulidad* y la *rescision* de la compra-venta: no así la legislacion especial de que estamos tratando. Esta habla siempre de nulidad, nunca de rescision; y es sin duda porque ambas acciones se confunden en su efecto principal de invalidar el contrato, produciendo una verdadera restitucion *in integrum*.

Además; en estas ventas no tienen nunca lugar las condiciones rescisorias y resolutorias: están prohibidas las demandas de lesion por el art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, como esplicamos en la seccion V, al tratar del precio; y aunque se dá lugar á la accion redhibitoria por la ocultacion de cargas, esta por regla general produce la anulacion del contrato. De aquí tambien el que no se creyera necesario distinguir entre la rescision y la nulidad. No por esto dejan de haber casos de rescision: en muchas de las incidencias tiene la Hacienda pública la facultad de elegir entre la nulidad de la venta y la indemnizacion de perjuicios, segun mas convenga á sus intereses, quedando en este caso firme y subsistente el contrato, y rescindiéndose en aquel.

Lo propio que en el derecho comun, las causas de nulidad provienen principalmente de faltar en el contrato alguno de los requisitos esenciales, como *cosa, precio y consentimiento*, ó de haber ocurrido cualquier accidente que vicie estos requisitos. Pero no siempre unas mismas causas producen los mismos efectos, pues, como antes se ha dicho, la Hacienda en muchos casos puede optar, entre la nulidad y la indemnizacion, por lo que crea mas conveniente á sus intereses.

Y no siempre han regido los mismos principios; sino que se han ido modificando, segun lo aconsejaba la esperiencia, con el objeto de impedir reclamaciones, mas ó menos abusivas, que redundaban en perjuicio de los intereses del Estado. Estas modificaciones, cuando se han hecho para los casos sucesivos, ningun perjuicio, reclamable en rigor de justicia, han irrogado á los compradores, toda vez que éstos se someten, y se habian sometido, á la ley que les impone el vendedor; pero alguna vez se han dictado con efecto retroactivo, y en este caso no es tan claro y espedito el derecho del Estado para someter á los compradores á condiciones que no les impuso al tiempo de la subasta.

De lo espuesto se deduce, que no se han establecido ni era fácil establecer reglas y principios generales, en la materia de que tratamos, para todos los casos que pueden ocurrir. La única regla general es que estos contratos, despues de perfeccionados con la aprobacion de la Junta superior de ventas, *solo pueden anularse ó dejarse sin efecto por haberse procedido con un vicio esencial, ó por*

abandono del comprador (1). De este abandono, que lo constituye la falta de pago del precio en los plazos estipulados, y de sus efectos, se trató ya en la seccion VI, donde pueden verse. Los vicios esenciales pueden nacer del error en la cosa, ó en el precio; de falta de consentimiento; de defectos en las subastas, ó de resultar nuevas cargas que no se tuvieron presentes al verificar la venta, ni se rebajaron por tanto del precio del remate. De todo esto y de sus efectos se tratará en los párrafos que siguen de esta misma seccion.

Los efectos de la nulidad de estas ventas son, por regla general, los que las leyes atribuyen á la nulidad de todo contrato, cuando no ha mediado dolo; la restitucion de las cosas al ser y estado que tenian antes de la venta. La finca vuelve á poder del Estado, y éste devuelve al comprador el todo ó parte del precio que hubiere satisfecho, y en los mismos efectos en que lo pagó; si en dinero, en dinero; y si en efectos públicos, en el mismo papel ó su equivalente.

En cuanto á mejoras ó desperfectos é intereses, del art. 171 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se deduce que debiera seguirse lo establecido por el derecho comun, segun el cual el comprador de buena fé hace suyos los frutos, con derecho á las mejoras, y el vendedor se utiliza del dinero, con derecho tambien al abono de desperfectos. Sin embargo, por Real órden de 27 de Julio de 1861 se estableció como regla general, que en todos los casos en que, á consecuencia de haberse declarado la nulidad de la venta, haya que devolver á los compradores las sumas que por tal concepto hubiesen satisfecho en metálico ó billetes, tienen aquellos derecho además al abono del interés del 5 por 100 anual, siempre que reintegren á la Hacienda, corporaciones ó particulares propietarios de las fincas las rentas ó réditos caidos hasta el dia en que se verifique la devolucion; de suerte que si el comprador no devuelve los frutos, tampoco tiene derecho al interés del dinero desembolsado. Esta medida ocasiona graves perjuicios al Estado, como se demuestra en la *memoria* ya citada del Director del ramo, pues el comprador no pide la liquidacion sino cuando los intereses importan mas que los frutos. A dicho fin, deben los compradores presentar cuenta justificada de productos y gastos, la cual, despues de censurada por la administracion económica, y en su caso por la corporacion propietaria, se remite á la Direccion del ramo para su aprobacion y disponer los abonos procedentes con la bonificacion antes indicada (1).

Respecto de mejoras y desperfectos, ya hemos indicado que ha de estarse al derecho comun. Cuando los bienes pertenecen á corporaciones civiles, á las cuales se devuelven por tanto, el Gobierno tiene reconocido, que la obligacion de sanear al comprador y abonarle las mejoras es de la misma Hacienda, como vendedora, y no de la corporacion propietaria; pero como esta recibe el beneficio, tiene á su vez la obligacion de indemnizar á aquella. Para evitar en tal caso dos liquidaciones que pudieran dar resultados diferentes, está mandado que la administracion económica practique la liquidacion en vista de la cuenta justificada, presentada por el comprador, y de los demás antecedentes necesarios al efecto; que se obligue á la corporacion propietaria á concurrir conjuntamente á dicha liquidacion, esponiendo cuanto crea convenirle; y que si ésta se resiste á concurrir, practique aquella por sí misma la liquidacion, indemnizando al comprador, y dando conocimiento del resultado á la corporacion para que le pare los perjuicios á que haya lugar (2).

(1) Declaracion hecha por el Consejo de Estado en R. dec.-sent. de 10 de Junio de 1867, que contiene además lo que sigue: «Considerando, en cuanto al abandono atribuido á los compradores, que el estravío de los espedientes de subasta y de todos los documentos que debieran existir en las oficinas de la Administracion, opone un obstáculo insuperable á la justificacion de aquel abandono, porque no consta que se les notificaran las órdenes de adjudicacion de las fincas, y menos por consiguiente la fecha en que se hubiera realizado; y faltando este dato no puede imputárseles *la omision de pago, que constituye el abandono.*»

(1) Circular de la Direccion de 9 de Enero de 1864.

(2) Real órden de 9 de Marzo de 1868.

Acerca de las operaciones que deben verificar las oficinas de Hacienda para realizar los abonos y pagos que quedan indicados, y cargarlos en su caso á la corporacion civil correspondiente, pueden verse las Reales órdenes de 27 de Junio de 1861 y 19 de Octubre de 1863, y las circulares de la Direccion del ramo de 9 de Enero de 1864 y 27 de Julio de 1865, además de las instrucciones para la contabilidad de la Hacienda pública.

Téngase presente, por último, que en el caso de anularse alguna venta por resolucion gubernativa, debe pedirse anotacion preventiva de esta resolucion en el registro de la propiedad; y cuando cause estado, cancelarse la inscripcion del contrato anulado, en la forma que previene el art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.

§. 2.° *Error en la cosa: ventas de cuerpos ciertos.*

Como la *cosa* es uno de los requisitos esenciales de la compra-venta, el error acerca de ella es tan capital que produce la nulidad del contrato. Pero es preciso que afecte á la esencia de la cosa: si afecta solo á alguno de sus accidentes, el contrato es válido, por que realmente no ha habido error en la cosa, y entonces la cuestion podrá ser á lo sumo de indemnizacion de perjuicios. Esta es la regla general, que de acuerdo con el derecho comun puede establecerse en la presente materia, y conforme á ella han sido resueltos los casos que han ocurrido en la práctica, como vamos á esponer.

Falta la conformidad de las partes acerca de la cosa que se vende, cuando la Administracion acuerda subastar una finca, y recae sobre otra la tasacion y la venta. En tal caso hay error sustancial sobre la cosa, que produce la nulidad del contrato (1).

Aunque el desacuerdo de las partes no verse sobre la identidad de la cosa en su totalidad; sino sobre lo que en ella debe comprenderse, este desacuerdo produce tambien la nulidad de la venta, siempre que recaiga sobre una parte esencial de la misma cosa, pues en tal caso, además del error que acerca de ésta tiene una ú otra parte, falta la conformidad de ambas sobre un requisito esencial de la venta, cual es la cosa vendida (1).

(1) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 21 de Octubre de* 1865. Se declaró la nulidad de la venta por los motivos siguientes:

«Considerando que de los informes de la administracion de propiedades del Estado en la provincia de Albacete resulta que la dehesa de los propios de Robledo, mandada subastar en Agosto de 1859, fué la señalada en el inventario con el número 244, llamada del Consejo, cuya renta era de 600 rs. von.; pero no la titulada Hoya del Conejo, inventariada con otro número y que producia en renta 1,600 rs.

Considerando que la confusion y el error en que incurrió el perito tasador, atribuyendo á la comision de ventas una equivocacion que no padeció, y aplicando á la dehesa Hoya del Conejo la órden que se referia á la del Consejo, no pudieron alterar válidamente el acuerdo de la Administracion, que mandaba enajenar la segunda y no la primera:

Considerando que si á pesar de esto *el demandante creyó subastar la que no se vendia, es indudable que hubo error sustancial en el contrato, pues faltaba la conformidad de los interesados en la cosa vendida, lo cual produce la nulidad de aquel.*»

(1) Así lo tiene declarado el Consejo de Estado en *R. dec.-sent. de* 30 *de Enero de* 1868, fundándose en la ley 20, tít. 5.°, Part. 5.ª, que dispone que «si el comprador é el vendedor desacordasen en la cosa sobre que fué fecha la vendida, non valdria.» En el caso á que se refiere, el comprador pretendia que le pertenecian todas las tierras comprendidas en un monte, por haberlo comprado como cuerpo cierto y con linderos determinados: la Administracion solo le concedia los terrenos incultos, que eran los espresados en los anuncios, y no los cultivados, los cuales constituian dos terceras partes de la finca; y por falta de este acuerdo se declaró la nulidad de la venta, que fué confirmada por dicha sentencia. Esta, despues de citar la ley antedicha, dice así:

«Considerando que aun cuando en el número 309 del *Boletin oficial* de la provincia de Zaragoza se anunció para el 28 de Diciembre de 1860 el remate de un monte con linderos determinados, tambien es cierto que en el propio anuncio se espresó claramente que el objeto sacado á la venta era *tierra inculta*, y no de otra clase, y que la *renta* de la misma era *calculada*, por lo cual no cabe suponer estensiva la enajenacion á tierras de cultivo no anunciadas:

Considerando que es así mismo cierto que cuando se ofrece en venta una finca, no por su tasacion ó aprecio, sino por la capitalizacion de renta calculada con referencia á una sola porcion ó parte de terreno *señalado* y de *medida fija*, no puede entenderse vendido lo que no pudo ser objeto del cálculo de capitalizacion:

Considerando que en el presente caso aparece claramente que para graduar la renta sirvió de fundamento el cálculo de que podian alimentarse próximamente 100 cabezas de ganado en los 209

Está prevenido, como se dijo en su lugar, que los peritos, al tasar las fincas, deben clasificar los terrenos, y hacerse cargo de los edificios, plantíos y demás circunstancias, espresándolo todo en la certificacion. Si hacen caso omiso de ello, se comete un error sustancial acerca de la cosa, y falta tambien la conformidad del vendedor, pues no puede suponerse que el Estado preste su consentimiento á una venta hecha fuera de las condiciones designadas en la certificacion de justiprecio, puesto que las circunstancias en esta espresadas no eran las propias de la finca, y alteraban su clase, importancia y valor. Estos vicios son esenciales, y producen la nulidad del contrato por error en la cosa, y falta de consentimiento (1).

Por las propias razones es tambien nula la venta, cuando no hay conformidad entre los anuncios y la tasacion y capitalizacion de las fincas: esto es, cuando las fincas espresadas en los anuncios de la subasta son de distinta calidad que las comprendidas en la certificacion de los peritos, y tampoco es igual la renta de aquellas á la que sirvió de base para la capitalizacion de éstas, de suerte que aparezca se vendieron distintas fincas de las anunciadas (1).

Pero cuando el error sobre la calificacion de los terrenos no altera la esencia de la cosa, por estar ésta bien determinada y haber sido tasada como correspondia segun su clase y productos, no puede considerarse como sustancial; sino como accidental, mediante á que no recae sobre la sustancia de la cosa, requisito que exigen las leyes 20 y 21, tít. 5.°, Partida 5.ª, para la nulidad del contrato; sino sobre uno de sus accidentes, cuáles son la bondad ó calidad del terreno, y de consiguiente no es motivo bastante para invalidar la venta. Y tampoco para la indemnizacion de perjuicios, aunque los hubiera, porque las reclamaciones de lesion están prohibidas por el art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, como ya se ha dicho (2).

---

cahices de monte *ó tierra inculta* que se sacaban á subasta, y no otros productos de labrantío; por lo que el comprador solo tiene derecho á aquella porcion de terreno que compone el número de cahices que se graduó podia producir la indicada renta, base de la capitalizacion y tipo de la subasta:. ..

Y considerando que al insistir el demandante, fundado equivocadamente en el citado anuncio del *Boletin oficial*, en que se estime vendido *todo* el monte blanco, así la *tierra inculta* como la *de labor*, pide lo que no le fué vendido, y en tal concepto *es evidente la falta de acuerdo entre el comprador y el vendedor respecto á la cosa enajenada; desacuerdo que produce necesariamente conforme á derecho la nulidad del contrato.....*»

(1) *R. dec.-sent. del Consejo de Estado de 6 de Febrero de 1866.* Se declaró la nulidad de la venta por los motivos siguientes:

«Considerando que las dehesas Robledo y la Carne contienen en su perímetro casas-cortijos, huertos, frutales, tierras de riego, viñas y un considerable número de pinos, circunstancias que omitieron los peritos al sentar la diligencia de reconocimiento y avalúo, por cuya razon fueron anunciadas para la venta, estándose á la declaracion de los mismos, como tierras de tercera clase, pobladas solo de madroño, romero y otras especies de poca importancia:

Considerando que en la retasa, además de las ocultaciones espresadas, se variaron los linderos de la dehesa la Carne, aumentando su cabida sin espresarlo, y suponiéndola de consiguiente igual á la de la primera tasacion:

Considerando que no puede suponerse que el Estado prestó su consentimiento á una venta hecha fuera de las condiciones designadas en la certificacion de justiprecio, y con errores sustanciales que vician el contrato:

Considerando además, que dichas dehesas, como vendidas despues de la Real órden de 10 de Abril de 1861, no lo fueron á cuerpo cierto, y por lo mismo que *la mayor cabida y demás circunstancias que las diferencian de lo anunciado para la subasta son motivo de nulidad del contrato.*»

(1) *R. dec.-sent. del Consejo Real de 22 de Octubre de 1851.* Dice su 2.° considerando: «Que además de los defectos de nulidad que se observan en la tasacion, el haberse anunciado en el *Boletin oficial* la venta de fincas de primera, segunda y tercera calidad, mientras que de la tasacion pericial solamente resultan suertes de segunda y tercera, y el haber certificado las oficinas de Hacienda al hacer la capitalizacion que las fincas producian solamente diez y ocho fanegas de pan mediano, cuando resulta que los productos de las vendidas eran de cuarenta fanegas, demuestran claramente que *se vendieron distintas fincas de las anunciadas, y que por consiguiente hubo error en la cosa vendida y faltó el consentimiento sobre ella, condicion esencial para la validez del remate.*»

(2) *Reales decretos-sents. del Consejo de Estado de 25 de Enero de 1864 y 26 de Mayo de 1868; y sent. de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 25 de Junio de 1869.* Esta última se fundó en lo siguiente: «Considerando, además, que cualquiera que sea la manera como se aprecie este antecedente (el de haberse anunciado como de tercera clase algunas tierras calificadas por los peritos como de cuarta), no puede invocarse para pedir la nulidad de la venta por falta de consentimiento, pues para que el *error* produzca este efec-

Cuando se venden juntas varias suertes ó porciones de tierra, sirviendo de tipo para la subasta el valor correspondiente á todas ellas, si despues se esceptúa de la venta ó se declara no comprendida en esta alguna suerte ó parte del terreno, esto produce los mismos efectos que el error sustancial sobre la cosa vendida, mediante á ser imposible la entrega al comprador de todo lo que compró; y por lo tanto es otro caso en que procede la nulidad de la venta (1).

Lo propio sucede, por la misma razon, si antes de verificarse el remate se expropia y ocupa una porcion de la finca para una obra de utilidad pública, ó con otro objeto que no puede impedir la Hacienda, y no se hace mencion de esta novedad en el acto de la subasta. Pero si enterado el comprador solicita incondicionalmente la revalidacion de la venta, sin pedir reduccion del precio, y así lo acuerda la Junta superior de ventas, queda purgado el vicio de que al principio adoleció el contrato y firme éste por la voluntad de los contrayentes, si bien obligada la Hacienda á sanear al comprador en el caso de que éste no pueda conseguir de quien corresponda el pago de la parte segregada (2).

No se deduzca de lo antedicho que en todos los casos en que sean nulas las ventas por error en la cosa, pueden revalidarse y quedar firmes por la voluntad y consentimiento de ambos contrayentes. Ese vicio solo puede purgarse de este modo siempre que quede íntegra la cosa y sin alteracion el precio, tal como aquella se anunció y este se ofreció en la subasta. Cualquiera alteracion que se haga en la cosa ó en el precio, equivaldria á un nuevo contrato, que el Estado no puede celebrar sino en subasta pública, siendo nulo de lo contrario (1). No sucede lo

---

to, con arreglo á lo dispuesto en las leyes 20 y 21, título 5.° de la Part. 5.ª, *ha de recaer sobre la sustancia de la cosa* que fuese objeto del contrato, *no bastando que recaiga sobre la bondad ó calidad de la misma*, segun doctrina universalmente admitida y sancionada por el Consejo de Estado.

Considerando que tampoco puede apoyarse la demanda en el perjuicio que el demandante supone haber esperimentado, no solo porque lo impide lo dispuesto en el art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855; sino además, porque habiéndose anunciado las fincas por el precio que se las dió en la tasacion, se subastaron sobre la base del que efectivamente les correspondia, y de consiguiente no ha podido haber lesion en este concepto.»

(1) R. dec.-sent. del Consejo de Estado de 15 de Abril de 1867.

(2) *R. dec.-sent. del Consejo de Estado de 21 de Febrero de* 1860. Se remató una finca sin espresarse que por ella estaba trazada y pasaria una carretera: se declaró por este motivo la nulidad del remate; pero se revocó este acuerdo á solicitud del rematante, el cual, sin embargo, pidió despues la nulidad, que desestimó el Consejo de Estado por los motivos siguientes:

«Considerando que si bien al efectuarse el remate hubo error acerca de la cosa vendida, despues el comprador Vizmanos, con entero conocimiento de causa, y sin pedir reduccion del precio ofrecido en la subasta, ni rebaja de los 12,000 reales que dieron de valor los peritos en Guadalajara al terreno que habia de perder la huerta, solicitó incondicionalmente la revalidacion de la venta, que fué acordada por la Junta, quedando así purgado el vicio de que al principio adoleció el contrato, y firme éste por la voluntad de ámbos contrayentes:

Considerando que tales actos equivalieron por parte de Vizmanos á la aceptacion pura y simple de la venta de la huerta tal cual ésta se hallaba al tiempo de pedir la revalidacion, ó sea á recibirla dividida en dos trozos, y con derecho á reclamar de quien correspondiera el valor de la parte ocupada por la carretera:

Considerando que por lo mismo la obligacion de la Hacienda pública está reducida al saneamiento de lo que importe dicho terreno ocupado, cuando no le sea satisfecho por quien deba hacerlo en la cantidad y del modo que dispone la ley de expropiacion forzosa.»

(1) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 7 de Abril de* 1866. Se vendió un convento con esclusion de la Iglesia y otras dependencias, con espresion de que constaba de 1551 varas de sitio. Suscitada despues cuestion sobre la parte del edificio que habia sido escluido de la venta, resultó que el comprador estaba poseyendo mas terreno del vendido. En la resolucion de este espediente se mandó entre otras cosas, «que en atencion á que el comprador del convento, aun escluidas las mencionadas localidades, estaba disfrutando mayor cantidad de terreno que la que adquirió por la subasta, debia exigírsele el abono correspondiente á la porcion de terreno que habia recibido con esceso.» El comprador entabló demanda contenciosa contra esta resolucion, la cual se dejó sin efecto por dicha sentencia, mandando que, prévio el deslinde correspondiente, la Administracion procediera con arreglo á las leyes respecto al esceso de terreno, por los motivos siguientes:

«Considerando que no habiendo comprado ni pagado mas terreno que el que se espresó en la subasta, carece de título para retener el que esceda de las 1,551 varas en ella comprendidas:

»Considerando que la adjudicacion del terreno escedente, hecha al demandante por la Real órden

mismo cuando por conformidad de las partes se resuelve alguna duda acerca de la identidad de la cosa dentro de los límites y condiciones de lo anunciado. Esta conformidad puede ser espresa ó tácita: se reputa de este modo cuando la Administracion adjudica la finca y el comprador paga el primer plazo y toma posesion de ella sin protesta de ningun género (1).

Como nadie puede trasmitir derechos que no tiene, si el Estado vende una finca que no le pertenece ó de que no puede disponer, es indeclinable la nulidad de la venta, luego que se reclame y justifique ese error padecido sobre la cosa, mediante á que afecta esencialmente á la validez del contrato. Tales errores se cometen con frecuencia, no por dolo ni mala fé, que no son presumibles, al menos con relacion al Estado; sino por falta de datos, consecuencia natural de la diversa procedencia de los bienes, y del abandono en que las corporaciones civiles y demás manos muertas han tenido la titulacion y registro de su propiedad inmueble.

Siempre que el Estado ha vendido una finca que no le pertenecia en todo ó en parte, procediendo con la buena fé debida ha declarado la nulidad de la venta, luego que el interesado ha reclamado y justificado su derecho de propiedad: era una venta de *cosa agena*, que no podia prevalecer por la ley ni por la equidad. Y no solo es nula la venta cuando no pertenece al Estado la cosa vendida; sino tambien cuando no le pertenece en el concepto en que se vende, aun cuando la posea legítimamente por otro concepto. Si, por ejemplo, se enajena una finca como procedente de los propios de un pueblo, y despues resulta que pertenecia á un santuario de que era patrono el Ayuntamiento, en cuyo concepto la poseia, esta venta es nula, por no ser la finca de la propiedad del Ayuntamiento, en cuyo concepto habia sido enajenada (1).

Por la propia razon es tambien nula la venta cuando, no perteneciendo al Estado, ó á la corporacion de quien procedan los bienes, sino el dominio útil de una finca, se vende esta en pleno dominio. En tal caso no puede prevalecer la venta, aunque el comprador se allane á reconocer el gravámen del dominio directo y pagar sus pensiones, si á la vez exige se le rebaje del precio del remate el capital de la carga (2).

No pueden enajenarse aquellos bienes que, por motivos de interés público, ó por respeto á derechos adquiridos, la ley ha estimado conveniente reservar para usos determinados. En este caso se hallan todos los esceptuados de la venta por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 y por el 2.° de la de 11 de Julio de 1856. Si se vende cualquiera de estos bienes, es nula la venta por ser hecha contra la ley, y carecer por tanto la Administracion de facultades para realizarla (3).

Y tambien es nula la venta cuando no se puede disponer libremente de la finca en vir-

---

reclamada mediante el pago de su valor, *equivale á una enajenacion sin subasta,. que no esta en las facultades de la Administracion.*»

(1) *Real decreto-sentencia de 30 de Enero de* 1868. D. Felipe Navas despues de pagar el primer plazo y de tomar posesion sin protesta de unas fincas que habia comprado, rebajándole el capital de un censo, pretendió que le correspondian otras varias, que estaban afectas al mismo censo. Negada esta pretension, pidió la nulidad del remate, que tambien fué desestimada, en razon á que lo anunciado no eran todas las fincas gravadas con el censo, sino la suerte entregada al comprador, y por los demás fundamentos siguientes:

«Considerando que las fincas anunciadas fueron adjudicadas por la Junta superior de ventas á Don Felipe Navas, que pagó el primer plazo despues de rebajarse del precio el capital del censo impuesto á favor de D. Dámaso Cerrajeria, y *tomó posesion de ellas sin protesta de ningun género, habiendo habido por lo tanto conformidad entre la Administracion y el comprador* respecto de las fincas enajenadas:

Considerando que antes de presentar su proposicion pudo D. Felipe Navas informarse de la calidad de las tierras, y que no existe en el contrato objeto del presente pleito error sustancial ni vicio alguno de los que anulan las ventas con arreglo á las leyes.»

(1) Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 27 de Diciembre de 1866.

(2) Art. 2.° de la Real órden de 18 de Octubre de 1862, y decreto-sentencia del Consejo de Estado de 15 de Abril de 1867.

(3) Reales decretos-sents. del Consejo de Estado de 20 de Mayo de 1864, 24 de Marz y 17 de Diciembre de 1866 y otras. Véase tambien en la sec. 3.ª de la *parte legisl.* la Real órden de 22 de Setiembre de 1862.

tud de compromisos ó contratos anteriores, que impiden su enajenacion mientras no llegue el caso de la condicion resolutoria. Las leyes de desamortizacion no han estinguido las obligaciones que existian sobre los bienes desamortizados, y el Estado tiene que respetar las contraidas por las corporaciones y demás manos muertas, de cuyos bienes se ha incautado, sucediendo por tanto en sus obligaciones y derechos (1).

Ventas de cuerpos ciertos. Bajo esta enunciativa, adoptada oficialmente, vamos á esponer cuanto se refiere á la validez ó nulidad de las ventas *por falta ó esceso de cabida.* En realidad equivale á venta de cosa fija y determinada por un precio alzado; pero como esta cuestion vá siempre ligada con aquella en estas clases de ventas, no puede prescindirse de tratarlas á la vez, y debemos hacerlo en este lugar por ser un error, que se refiere á la cosa.

El error en la cabida ó medicion de las fincas es el que ha dado y está dando lugar á mayor número de reclamaciones, por ser muy frecuente, y fácil de incurrir en él, hasta sin malicia. Y es tambien sin duda el mas difícil de resolver. Si se considera como error sustancial en la cosa, que afecta á la validez del contrato, la falta ó esceso en la cabida del terreno, el comprador arrepentido se vale de este recurso para reclamar la nulidad de la venta ó una indemnizacion, las mas veces sin justicia, toda vez que el tipo para la subasta estuviese arreglado al verdadero valor de la finca, cualquiera que fuese su estension. Por el contrario, si se admite lo que se llama teoría ó *doctrina de cuerpos ciertos*, hay el peligro para el Estado de que se vendan como de poca estension y valor terrenos que valen mucho, lo cual ha sucedido en no pocas ocasiones. No es estraño por tanto que este punto haya sido objeto de preferente atencion de todas las administraciones, y que se hayan dictado resoluciones contradictorias, sosteniendo en unas y condenando en otras dicha doctrina de considerar las ventas como de cuerpos ciertos ó determinados, sin atender á su cabida.

En la ley é instruccion de Mayo de 1855, lo propio que en las disposiciones anteriores, aunque se acordó la medicion de las fincas para sacarlas á la venta, nada se dispuso sobre el punto concreto de que estamos tratando. De aquí el que se siguiera el derecho comun, segun el cual son válidas las ventas, siempre que estén conformes las partes en la cosa y en el precio, aun cuando haya error ó equivocacion en alguno de sus accidentes, cual lo es la estension ó cabida de un terreno: este error solo dá lugar á la indemnizacion, si se fijó el precio en consideracion á la cabida, á tanto por fanega, hectárea, etc.; pero es inapreciable, cuando se vendió la finca por una cantidad alzada.

En este sentido se resolvieron gubernativamente y en la vía contencioso-administrativa cuantas cuestiones de esta clase se suscitaron antes de la Real órden de 10 de Abril de 1861. Siempre que en los anuncios de la subasta se designaba la finca por su nombre, si lo tenia, espresando su situacion, sus linderos fijos y determinados y todas sus demás circunstancias, de suerte que no hubiera duda acerca de la identidad de la cosa, y de su estension ó límites, y además se fijaba el precio, no á tanto por hectárea ó en consideracion á la cabida; sino por una cantidad alzada, se estimaba hecha la venta como de *cuerpo cierto* ó cosa determinada, y se tenia por válida y subsistente, cualquiera que fuese, aunque escediera del duplo, la diferencia

(1) *Dos R. decret.-sents. del Consejo de Estado de 15 de Julio de 1866.* Un ayuntamiento concedió el aprovechamiento de unas aguas de su propiedad mediante el pago de cierta pension, con la condicion resolutoria de que quedaria sin efecto la concesion cuando conviniere á la municipalidad ó al comun de vecinos utilizar las aguas en objetos peculiares del comun. Sin embargo de esta condicion el Estado vendió las aguas, y á reclamacion de los concesionarios se anularon las ventas por el siguiente fundamento:

«Considerando que mientras no llegase el caso de la condicion resolutoria, ó no se anulara el contrato si para ello existiese causa, no podian ser enajenadas dichas aguas sobrantes por el ayuntamiento que las cedió, ni por consiguiente por el Estado, porque la ley de desamortizacion no estinguió las obligaciones existentes sobre los bienes desamortizados, que impidieran su venta, ínterin que legalmente no desapareciesen ó por el cumplimiento de las condiciones, ó por la anulacion de los contratos.»

que resultara en la medida con que se anunció, sin derecho á indemnizacion por una ni otra parte.

Pero esta jurisprudencia fué condenada por la citada Real órden de 10 de Abril de 1861. Resolviendo un caso particular, se declaró nula la venta de una suerte ó porcion de cierta dehesa, «por haber tenido lugar con error esencial en la designacion del número de fanegas de que se compone, inferior en mas de una mitad del consignado en el anuncio,» y se concedió á los compradores de dos suertes de la propia dehesa la indemnizacion correspondiente á la menor cabida de las mismas, «en atencion á no llegar la falta á la mitad del número de las fanegas con que fueron ofrecidas en el propio anuncio de la venta.» Fundóse esta resolucion en que «las fincas desamortizadas no pueden salir á las ventas como cuerpos ciertos, sino por la cabida que contengan, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 106, 110 y 125 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que previenen que dichas fincas sean medidas y anunciadas en subasta con espresion de su cabida, clase, situacion, renta anual, cargas, precios de tasacion y de capitalizacion.» Así lo previenen en efecto; pero como nada disponen espresamente acerca del punto en cuestion, no se estimaron como obstáculo para sujetarse al derecho comun, estableciendo la jurisprudencia antes indicada.

Al propio tiempo se mandó que dicha resolucion forme jurisprudencia para todos los casos de igual naturaleza que puedan ocurrir en lo sucesivo, «teniendo muy presente que los *bienes desamortizables no son ni pueden ser enajenados como cuerpos ciertos*; sino por la cabida ó número de fanegas que contienen.» Quedó, pues, condenada la doctrina de los *cuerpos ciertos*, y establecida en su lugar la regla de que procede la nulidad de la venta por error en la cabida, cuando hay falta de terreno y esta consiste en mas de la mitad de la medida consignada en el anuncio de la subasta; pero si no escede de dicha mitad, es válida la venta, y solo procede la indemnizacion de perjuicios al comprador.

Bien pronto se tocaron los inconvenientes de esta medida en su segundo estremo, por los perjuicios que ocasionaba al Estado, pues en muchos casos, no llegando la falta de terreno á la mitad de la cabida, y siendo por tanto indemnizable, ascendia la indemnizacion á mucho mas de la mitad del valor en que fué rematado el prédio, porque la parte que se segregaba solia estar roturada y plantada de viñedo ó arbolado. Así se consignó en el considerando 3.° de la Real órden de 24 de Diciembre de 1862, que puede verse en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*, y de ello se deduce que no solo se concedia la indemnizacion en el caso de error en la medida; sino tambien cuando á reclamacion de parte se esceptuaba de la venta ó se segregaba de la finca alguna porcion de ella, siempre que no escediera de la mitad del terreno; casos enteramente distintos, y que no podian regirse por una misma regla, pues en el segundo no queda íntegra la cosa, y la nulidad es lo procedente.

Se confundieron, sin embargo, ambos casos, y para remediar los abusos á que estaban dando lugar las indemnizaciones, por dicha Real órden de 24 de Diciembre de 1862 se modificó el segundo estremo de la de 10 de Abril del año anterior, mandándose que en los casos de falta de cabida ó arbolado, ó en cualquiera otro en que haya reclamacion de los compradores, *sea potestativo el que el Estado opte entre la indemnizacion ó la nulidad*; y se declaró á la vez que los acuerdos que sobre este punto adoptara la Junta superior de ventas, no se llevaran á efecto sin la aprobacion del Ministerio de Hacienda.

En esta resolucion no se determinó si la facultad que se reservó el Estado de optar entre la nulidad y la indemizacion, era para todos los casos, ó solo cuando la falta de cabida ó de arbolado no escediera de la mitad. Aunque esto último parecia lo legal, puesto que la Real órden de 10 de Abril no habia sido derogada espresa ni tácimente en el otro estremo en que declaró la nulidad de la venta siempre que la falta escediera de la mitad, es lo cierto que surgieron nuevas dificultades. Por otra parte, nada se habia dispuesto para el caso, mas frecuente todavía, de que resul-

tara *esceso* en la cabida, y como en esta clase de contratos deben ser recíprocos los derechos y obligaciones de las partes, igual derecho debia reconocerse en favor del Estado en este caso, que el concedido á los compradores para el de *falta* de cabida.

Preciso era, por tanto, igualar los derechos de ambas partes: justo, evitar los fraudes á que daban lugar las indemnizaciones; y conveniente, fijar con exactitud el límite del error en mas ó en menos de la cabida, que pueda anular el contrato. Con este objeto, de acuerdo con el dictámen del Consejo de Estado en pleno, se dictó la Real órden de 11 de Noviembre de 1863, por la cual se *fijó el plazo de dos años*, á contar desde el dia de la adjudicacion de la finca al rematante, para entablar toda reclamacion sobre falta ó esceso de cabida; y se estableció como regla fija y general, que si del espediente resultase que *dicha falta ó esceso iguala á la quinta parte de la cabida espresada en el anuncio, será nula la venta; quedando, por el contrario, firme y subsistente, y sin derecho á indemnizacion el Estado ni el comprador, si la falta ó esceso no llegase á dicha quinta parte.* Esta es la regla general, clara y precisa, que hoy está vigente (1), habiendo quedado derogado por ella lo que sobre este punto se dispuso en las dos Reales órdenes antes citadas. Y para que fuese mas obligatoria se mandó á la vez que se espresara como condicion en todos los anuncios de subasta que se publicaran desde aquella fecha, y así se verifica.

Respetando los derechos adquiridos, no se dió efecto retroactivo á ninguna de estas disposiciones, que se consideraron como condiciones para las nuevas subastas: preciso será por tanto, para resolver con acierto los casos que ocurran sobre falta ó esceso de cabida, atender á la fecha en que se verificó la venta. Hé aquí el resúmen de este punto, que conviene tener muy presente para no incurrir en errores.

Las ventas verificadas antes del 10 de Abril de 1861 se rigen por el derecho comun. Siempre que haya conformidad sobre la cosa y el precio, es válida la venta, cualquiera que sea la falta ó esceso de cabida que tenga la finca. Si esta se vendió por una cantidad alzada, sin consideracion á su cabida, no hay lugar á indemnizacion; pero si se fijó el precio con relacion á la cabida, á tanto por fanega, hectárea, etc., deben las partes indemnizarse la falta ó esceso que resulte. Véase, sin embargo, la novedad introducida recientemente sobre dicho estremo, de que luego nos haremos cargo.

Desde el 10 de Abril de 1861, todas las fincas se consideran vendidas por la cabida ó número de fanegas que contengan.

Desde dicho dia hasta el 11 de Noviembre de 1863, si la falta ó esceso de cabida pasa de la mitad, es nula la venta: si no llega á la mitad, procedia la indemnizacion, hasta que, en 24 de Diciembre de 1862, se dió al Estado la facultad de optar entre la indemnizacion y la nulidad.

Y desde el 11 de Noviembre de 1863 en adelante, si la falta ó esceso de cabida iguala ó escede á la quinta parte de la espresada en el anuncio, es nula la venta; y si no llega á dicha quinta parte, queda la venta firme y subsistente, sin derecho el Estado ni el comprador á indemnizacion alguna.

Pero volvamos á la importante cuestion sobre *cuerpos ciertos*, que hemos tenido que abandonar para esponer las novedades introducidas en los otros estremos de la Real órden de 10 de Abril de 1861. Respecto á dicho estremo, esta quedó subsistente, y desde entonces ninguna venta se ha estimado hecha como de cuerpo cierto; sino por la cabida ó número de fanegas que contenga la finca. En cuanto á las ventas anteriores, no se ha considerado aplicable dicha Real órden, tanto porque en buenos principios no podia dársele efecto retroactivo con perjuicio de dere-

(1) Por sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 24 de Diciembre de 1869, se ha hecho aplicacion de dicha Real órden de 11 de Noviembre de 1863, declarando la nulidad de una venta solicitada en tiempo por el comprador, en razon á que se le habia entregado la finca con falta de cabida que escedia de la quinta parte, y mandando á la vez que se devuelva al comprador por la Administracion del Estado el importe de los plazos satisfechos del precio del remate, con las indemnizaciones correspondientes por este concepto, conforme á instruccion.

chos adquiridos, como porque en ella misma se espresó que su resolucion formase jurisprudencia *para todos los casos de igual naturaleza que ocurrieran en lo sucesivo*. Así es que despues de ella, todos los casos de ventas anteriores á la misma se han resuelto constantemente por el Consejo de Estado conforme al derecho comun, que antes regia, aplicando la doctrita de los cuerpos ciertos, y declarando válidas las ventas de cosa determinada, cualquiera que fuese la falta ó esceso de cabida (1).

En este sentido se habia fijado la jurisprudencia, cuando se publicó la órden del Poder ejecutivo de 7 de Abril de 1869. Haciéndose cargo de la establecida en el Real decreto-

(1) Son muchas las *sentencias del Consejo de Estado* dictadas en este sentido: citarémos algunas de las mas importantes, cuyos considerandos conviene tener á la vista, porque además confirman la doctrina que hemos espuesto sobre los efectos de la falta ó esceso de cabida, y se esplican las circunstancias que deben concurrir para que se considere la venta como de cuerpo cierto.

Real decreto-sentencia de 27 de Enero de 1863. Se declaró subsistente la venta de una finca hecha en 1859, que se anunció con linderos fijos como de 313 fanegas, resultando despues de la venta que tenia 606, dejando sin efecto la Real órden que la declaró nula, por los motivos siguientes:

«Considerando que la única cuestion planteada en la demanda de estos autos, es si la venta del quinto de que en ellos se trata es válida ó nula, por haber mediado en ella error en la cabida:

Considerando que segun el derecho vigente, *semejante error no afecta la validez de las ventas de esta clase en ningun caso*:

Considerando que no es aplicable al de este litigio la mencionada Real órden de 10 de Abril de 1861, porque lo dispuesto en ella, *atendida su naturaleza y los principios que regulan los contratos*, no tiene ni puede tener mas fuerza que la de una condicion general para estas ventas, inaplicable á las anteriores á su fecha, como la de este pleito.»

Dos decretos-sentencias de 30 de Enero de 1865 hacen iguales declaraciones por los mismos fundamentos. Una de ellas se refiere á una finca, que constando de 202 fanegas, se anunció como de 30: tambien se declaró válida la venta por los motivos siguientes:

«Considerando que *el error en la cabida no es, segun el derecho vigente, causa de nulidad de la venta de una finca en ningun caso*:

Considerando que las modificaciones de esta regla, consignadas en diferentes Reales órdenes que se han espedido sucesivamente desde el 10 de Abril de 1861, no tienen ni pueden tener otro carácter que el de condiciones generales prefijadas para esta clase de ventas, y no son aplicables á las anteriores á su fecha respectiva, como la de este pleito, que se verificó en 28 de Junio de 1859.»

Otra de 24 de Abril de 1866. Se declaró válida una venta hecha en 1860 con esceso de cabida y de arbolado, dejando sin efecto la Real órden que la anuló; pero no se estimó como de cuerpo cierto, y en su consecuencia se mandó entregar al comprador solamente las obradas de tierra y el número de árboles que se espresaron en el anuncio de la subasta, cuya designacion se someteria al juicio de peritos. Dice así:

«Considerando que atendida la fecha de la venta en cuestion hay que aplicar el derecho comun para estimar sus efectos legales:

Considerando que, segun el indicado derecho, la venta de una finca, ora se haga como de cuerpo cierto, ora con respeto á la medida, siempre es válida, sin que en el primer caso haya lugar á reclamacion alguna, y en segundo solo á la del perjuicio que al vendedor ó al comprador resulte del error padecido en la cabida:

Considerando que la heredad de tierras labrantías, objeto del presente litigio, no puede decirse vendida como cuerpo cierto: primero, porque no se espresaron sus linderos en el anuncio de la subasta; y segundo, porque las certificaciones de los peritos no pueden suplir esta omision, puesto que los lindes particulares de 36 de las tierras ó porciones de dicha heredad son mas ó menos incompletos, no pudiendo por ello tenerse esta por bien circunscrita y determinada su totalidad:

Considerando que por estas razones solo tiene derecho el comprador á las tierras y árboles de la heredad de que se trata, en la cabida y número espresados en el anuncio de la subasta.»

Otra de 16 de Agosto de 1866. Se declaró válida una venta, cuya nulidad ó indemnizacion habia reclamado el comprador por falta de cabida, pues á una finca de 225 fanegas le faltaban 99, y á otra de 165 le faltaban 8. En los considerandos 3.° y 4.° se dice lo siguiente:

«Considerando, por otra parte, que la venta de la dehesa Remondo é Isla Quemada *debe reputarse hecha á cuerpo cierto, porque no se fijó el valor de cada fanega de tierra, sino el de la totalidad de cada finca, designándola por sus linderos*, tomando en cuenta la renta y capitalizándola por las bases preestablecidas:

Considerando que *la Real órden de 10 de Abril de 1861 solo debe aplicarse á las enajenaciones posteriores á su fecha*, ó lo que es igual, á los casos que pudieran ocurrir en lo sucesivo, segun en la misma se espresó, y que *esta es la inteligencia que se le ha dado por el Consejo de Estado en repetidas decisiones posteriores* respecto de ventas, en las que el calificarlas como hechas á cuerpo cierto ocasionaba graves perjuicios al Estado.»

Otra de 31 de Enero de 1868. Se confirmó la Real órden por la cual, declarando válida una venta hecha en 1844, se obligó al comprador á devolver unas tierras de que se posesionó, no comprendidas en el anuncio, imponiéndole la responsabilidad correspondiente como detentador. Los considerandos 2.° y 3.° dicen así:

«Considerando que las seis fincas rústicas se designaron en el anuncio por su cabida, y no por

sentencia del Consejo de Estado de 27 de Enero de 1865 (es el primero de la nota que precede), sobre considerar como de *cuerpos ciertos* las ventas de fincas con linderos fijos y determinados, hechas antes de publicarse la Real órden de 10 de Abril de 1861, y combatiéndola, resolvió «que *en los espedientes que pendan de resolucion ó que se incoen en lo sucesivo* sobre falta ó esceso de cabida, no se admita la doctrina de los cuerpos ciertos, *cualquiera que haya sido la fecha del remate*, y se fallen atendiendo únicamente á la cabida, calidad y demás circunstancias de la finca.» De suerte que se reproduce lo mandado por la citada Real órden de 10 de Abril de 1861; pero dándole efecto retroactivo, cualquiera que haya sido la fecha del remate. Y no solo ha de aplicarse á los espedientes que se incoen en lo sucesivo; sino tambien á los que pendan de resolucion, á los incoados antes de su fecha.

Si es contrario á los invariables principios del derecho dar efecto retroactivo á una simple órden del Gobierno, lastimando derechos legitimamente adquiridos al amparo de la ley y de la jurisprudencia constante de los tribunales encargados de aplicarla, aun es más irritante cuando se estiende á reclamaciones ya pendientes, que deben resolverse conforme al derecho preestablecido. Y esto se ha hecho *oido el Consejo de Estado* en pleno, lo cual significa contra el parecer de tan alto y respetable cuerpo. Supongamos dos espedientes, como efectivamente los hay, incoados á la

---

sus linderos, haciéndose mencion únicamente de algunos de estos:

Considerando que *no habiéndose consignado los linderos, no se vendió un cuerpo cierto*, y por consiguiente no es aplicable la doctrina establecida en varios decreto-sentencias respecto á la venta de los cuerpos ciertos.»

Otra del propio Consejo de Estado de 10 de Octubre de 1868, publicada en la Sala 3.° del Tribunal Sup. de Just. en 17 de Diciembre del mismo año. La venta á que se refiere se hizo en 1860 á tanto por fanega: el comprador reclamaba cierto terreno en el supuesto de que estaba comprendido dentro de los linderos y de que la venta era de cuerpo cierto: fué desestimada su pretension por los motivos siguientes:

«Considerando que la circunstancia de haberse designado una finca puesta en venta con espresion de sus límites ó linderos no basta para que se repute hecha la enajenacion como de cuerpo cierto, si además de haberse fijado con exactitud su estension ó capacidad se ha dado á cada unidad el valor correspondiente segun su clase, y se ha formado sobre esta base el precio total de la finca:

Considerando que si esta regla es siempre cierta, lo es mucho mas cuando en la designacion de los linderos no hubo la debida exactitud, y aun despues de diversos reconocimientos no ha sido posible precisar los que se dieron á la finca al tiempo de la venta:

Considerando que la realizada á favor del demandante, ó su cedente, lo fué por un número determinado y fijo de fanegas, estimada cada una segun su calidad, y formándose el precio total sobre la suma de las mismas unidades.»

Otra de la misma fecha, publicada tambien en 17 de Diciembre de 1868. En los considerandos 3.°, 6.° y 8.° se establece lo siguiente:

«Considerando que *con arreglo á la Real órden de 10 de Abril de 1861 y á la jurisprudencia establecida* en repetidos Reales decretos dados á consulta del Consejo de Estado, *las ventas de bienes nacionales que se hicieron con designacion de límites determinados se entienden hechas como de cuerpos ciertos*, y no cabe en ellas indemnizacion á favor de ninguna de las partes contratantes por esceso ni defecto en su cabida ó estension:

Considerando que las fincas núms. 6495 y 7168 fueron subastadas en Junio y Julio de 1861, y por consiguiente con posterioridad á la Real órden de 10 de Abril del mismo año, hallándose por tanto comprendidas en las prescripciones de la de 24 de Diciembre de 1862, que autoriza á la Administracion para optar entre la indemnizacion ó la nulidad de la venta:

Considerando que las disposiciones del derecho comun, relativas al contrato de ventas, no tienen aplicacion á las de bienes nacionales, sino en defecto de las especiales á que espresamente están subordinadas.....»

Y otra de 13 de Diciembre de 1864. La venta á que se refiere, como en el caso que precede, fué posterior al 10 de Abril de 1861, y anterior á la Real órden de 24 de Diciembre de 1862. Hace las siguientes declaraciones:

«Considerando que anunciada y realizada la venta de la dehesa Egido del Campo despues de la Real órden de 10 de Abril de 1861, ámbos contraventes aceptaron como condicion lo en ella resuelto, y quedaron sometidos á sus consecuencias:

Considerando que la consecuencia del error en la medida de una finca vendida por su cabida, y no como cuerpo cierto, no es la nulidad de la venta segun derecho, ni segun la Real órden citada, cuando el error no llega á la mitad del número consignado en el anuncio, sino la obligacion de indemnizar al que resulte perjudicado:

Considerando que anunciada y vendida la dehesa Egido del Campo, como de cabida de 1,400 fanegas, y comprendiendo 27,000 piés de encina, ha resultado que su cabida es de 1,807 fanegas, seis celemines y dos cuartillos, y que solo contiene 15,000 árboles, apareciendo perjudicada la Hacienda en 407 fanegas, seis celemines y dos cuartillos, y el comprador en 12,000 piés de encina, y hallándose así la una y el otro en la obligacion de indemnizarse mútuamente.»

vez por idéntica causa; el uno resuelto antes del 7 de Abril, declarando la venta como de cuerpo cierto; el otro, retrasado sin culpa del interesado, resuelto despues en sentido contrario. ¿Es esto justo?

Nuestros lectores pueden ver, en la seccion primera de la *parte legislativa*, dicha órden con los fundamentos en que se apoya. Solo diremos acerca de ellos, que habiéndose mandado espresamente en la Real órden de 10 de Abril de 1861 que su resolucion sirviera de jurisprudencia para los casos sucesivos, es claro que respetó la establecida hasta entónces en sentido contrario á la misma, y conforme al derecho comun; y el disponer ahora que se aplique tambien á las ventas anteriores á su fecha, es darle efecto retroactivo, por mas que se diga lo contrario en el considerando 2.° de la de que tratamos. Y en cuanto al decreto-sentencia de 27 de Enero de 1863, es verdad que no puede estimarse como una resolucion general aplicable á todos los casos, y que por sí solo no causa jurisprudencia; pero como la misma declaracion que en él se contiene, se ha hecho en otras siete sentencias del propio Consejo de Estado, que hemos copiado en este párrafo, y en otras muchas que pueden verse en la *Coleccion legislativa*, es evidente que habia ya jurisprudencia establecida con fuerza de ley, cuya jurisprudencia ha sido anulada por el Poder ejecutivo, y con efecto retroactivo.

¿Podrá escusar esta medida la defensa y proteccion de los intereses públicos? Contestará por nosotros el que en 1868 era Director del ramo, en la *memoria* antes citada. «De las infinitas incidencias, dice, en que tengo necesidad de ocuparme, he deducido que las que se dan á conocer con el objeto de producir una nulidad en beneficio del Estado, están, cuando mas, *en relacion de uno á ciento*, comparadas con las que en provecho propio alegan los particulares.» Y decia esto examinando los efectos de la Real órden de 10 de Abril de 1861, para demostrar la conveniencia de derogarla, y aplicar á estos casos el derecho comun, restableciendo las ventas de cuerpos ciertos, á fin de evitar perjuicios á la Hacienda.

¿Deberá aplicarse, ó mas bien, podrá aplicarse legalmente la citada órden de 7 de Abril de 1869, con el efecto retroactivo que en la misma se consigna, y con toda la estension que se deduce de su letra? Nuestra opinion queda ya indicada. Esperemos la jurisprudencia que establezca la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, encargada hoy de resolver soberanamente estas cuestiones en la vía contenciosa.

Ya en algun pleito se ha suscitado ante la misma la cuestion de las ventas de cuerpos ciertos; pero se trataba de ventas, que se habian realizado despues de la Real órden de 10 de Abril de 1861, y de consiguiente su aplicacion era indeclinable, y no ofrecia dificultad la resolucion negativa (1); y en un caso en que la venta fué anterior á dicha Real órden, se habia consignado en el anuncio de la subasta la condicion espresa de que «si resultaba en algun tiempo que á las fincas correspondiese mayor número de fanegas que las que respectivamente les estaban señaladas, los compradores no tendrian derecho á ellas, y sí solo á las que rematasen en pública licitacion.» Esta condicion terminante resolvia la cuestion. En vez de resultar mayor número de fanegas, resultaron 298 de ménos para completar las 680, que se vendieron, y la Administracion fué condenada á indemnizar al comprador rebajando proporcionalmente su importe del precio del remate, como lo exigia la reciprocidad de derechos y obligaciones que debe existir entre los contratantes (2).

Pero hay tambien un caso, resuelto despues de la órden citada del Poder ejecutivo de 7 de Abril de 1869, en el que el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado que, cuando se designa la finca con linderos determinados, sin fijar el valor de cada fanega, aunque se haya espresado el número de estas, *debe reputarse hecha la venta como de cuerpo cierto, conforme á la jurisprudencia que regia antes de la Real órden de 10 de Abril de 1861* (3). Esta declaracion es importante,

(1) Sentencias de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Justicia de 13 de Julio y 7 de Octubre de 1869.
(2) Sent. de id. de 12 de Julio de 1869.
(3) *Sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup.*

y aunque en el caso á que se refiere no se debatió concretamente la cuestion de que tratamos, revela, en nuestro concepto, que el espresado Tribunal estima, como nosotros, que no debe darse en justicia á esta Real órden el efecto retroactivo que aquella le atribuye.

§. 3.° *Error en el precio.*

Siendo el precio uno de los requisitos esenciales de la compra-venta, el error sustancial acerca de él, como el que recae sobre la cosa, debe producir la nulidad del contrato. Pero en estas ventas es preciso distinguir entre el error cometido al fijar el precio de la finca, y el de cálculo, en que pueda incurrir el comprador, ofreciendo en la subasta una cantidad superior al valor corriente de la cosa. En el segundo caso no es reclamable el error, ni dá lugar á indemnizacion de ningun género, como espusimos en la seccion V, al tratar del precio. El art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 prohibe toda demanda de lesion, y en esta prohibicion, consignada tambien como una de las condiciones de las subastas, se ha fundado la jurisprudencia constante de la Junta superior de ventas y del Consejo de Estado para no dar lugar á ninguna reclamacion de esta clase, siempre que el precio que sirvió de tipo para la subasta hubiere sido el que efectivamente correspondia á la finca (1).

No sucede lo propio en el primer caso. El error en el precio, que ha de servir de tipo para la subasta, afecta esencialmente á la validez del contrato, porque recae sobre uno de los requisitos esenciales de la compra-venta. Está mandado que las fincas de bienes nacionales se tasen en venta y renta por dos peritos; que se capitalicen además por la renta que produzcan, y en su defecto por la que se les calcule, y que sirva de tipo para la subasta el precio mayor que resulte entre la tasacion y la capitalizacion (2). Si se ha padecido error en estas operaciones, por equivacion ó por malicia, designando los peritos un valor en tasacion inferior al que realmente tiene la finca, ó no haciéndose la capitalizacion por la verdadera renta, de suerte que por consecuencia de estos errores se ha sacado la finca á subasta por un precio inferior al que le correspondia, se infringen las disposiciones antes citadas, y esta infraccion produce la nulidad del contrato, porque altera el verdadero valor de la cosa, y porque no puede el Estado prestar su consentimiento para la venta, aceptando un precio que se ha fijado en contravencion á las disposiciones legales (3).

---

de Just. de 8 de Marzo de 1870. El comprador de una finca pretendia pertenecerle una faja de terreno situada fuera de los linderos, suponiendo que uno de estos estaba equivocado, puesto que con ella se completaba el número de fanegas que le habian sido vendidas. Por esta sentencia se confirmó la Real órden en que se denegó dicha pretension; pero declarando que esto se entendiera «sin perjuicio del derecho que el demandante pueda tener respecto al número de fanegas de superficie de la dehesa vendida.» Se fundó en lo siguiente:

«Considerando que, segun resulta de la escritura últimamente traida á los autos, la venta de la suerte de dehesa de que se trata se hizo con designacion de los mismos cuatro linderos con que se habia anunciado en subasta; y que si bien se determinó además en 179 fanegas la superficie del terreno, no se fijó el valor de cada una de ellas, y debe reputarse hecha la venta á cuerpo cierto, conforme á la jurisprudencia que regia antes de la Real órden de 10 de Abril de 1861:....

Y considerando que si hubiese el error ó la diferencia que se supone en la superficie ó cabida del terreno vendido, esto podria ser objeto de otra reclamacion; pero no da derecho á que se traspasen los límites que se fijaron á la finca subastada.» (*Gaceta de 24 de Junio de 1870.*)

(1) La misma jurisprudencia sigue la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia. Véase, entre otras, la sentencia de 25 de Junio de 1869, la cual en su considerando 3.° dice lo siguiente:

«Considerando que tampoco puede apoyarse la demanda en el perjuicio que el demandante supone haber esperimentado, no solo porque lo impide lo dispuesto en el art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, sino además porque, *habiéndose anunciado las fincas por el precio que se las dió en la tasacion, se subastaron sobre la base del que efectivamente les correspondia*, y de consiguiente no ha podido haber lesion en este concepto.»

(2) Arts. 101 á 110, 113 á 116, 123 y 179 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

(3) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 17 de Abril de 1863.* Se declaró nula la venta á que se refiere, por error en la tasacion que alteró el tipo de la subasta; y al comprador con derecho á los frutos, mejoras y perjuicios, por los motivos siguientes:

«Considerando que está terminantemente mandado que en las subastas de bienes nacionales sirva de tipo para la fijacion del precio la cantidad

Esta jurisprudencia, fundada en los principios del derecho comun, y que tiene su apoyo en las resoluciones dictadas á consulta del Consejo de Estado, copiadas en la nota que precede, parece contrariada por otras resoluciones del propio Consejo, y aun tambien de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se establece que el error en la capitalizacion, cualquiera que sea la cantidad en que consista, no da lugar á la rescision ni anulacion del contrato, conforme al art. 170, antes citado, de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 (1). Examinadas en abstracto estas resoluciones, parece efectivamente que implican contradiccion; pero esta desaparece y se hacen conciliables examinándolas en concreto, ó con relacion al caso resuelto por las mismas, que es como deben considerarse. Este examen nos conduce al establecimiento de una regla, que puede servir de norma para resolver con acierto estas complicadas cuestiones.

Siempre que el error en la tasacion ó capitalizacion influya en el tipo y resultado de la subasta, de suerte que por consecuencia de él la finca haya quedado rematada por un precio inferior al que le hubiera correspondido de otro modo, es nula la venta, porque realmente ha habido error sustancial en el precio, y porque, habiéndose faltado á las disposiciones legales para fijarlo, el Estado no puede prestar su consentimiento á una venta hecha contra las reglas establecidas por la ley, que prohibe se vendan las fincas por un precio inferior al mayor que resulte entre la tasa y la capitalizacion, verificadas en la forma que la misma previene. Pero si aquel error no influye en el resultado de la subasta, bien porque el tipo para ella haya sido el legítimo, ó bien porque la finca haya sido pujada y rematada por una cantidad que cubra el tipo correspondiente rectificado el error, queda éste purgado, ó por lo menos ya no puede reputarse como esencial, y la venta por tanto es válida y subsistente, sin que por tal motivo pueda admitirse demanda de lesion, ni otra cualquiera dirigida á invalidarla (1).

---

mayor que resulte entre la tasa y la capitalizacion, y que por lo mismo *la infraccion de tal precepto afecta esencialmente la validez del contrato, porque no puede el Estado prestar su consentimiento para la venta, aceptando un precio que se ha fijado por error ó por cualquiera otra causa en contravencion á las disposiciones legales*:

Considerando que la subasta de la dehesa la Carnicera se anunció fijando como tipo para la venta la cantidad de la capitalizacion, que fué la de 94,500 rs., cuando debió fijarse la de 122,000, que era realmente la de la tasa, aunque por equivocacion ó por cualquiera otro motivo se dijese en los anuncios que habia sido de 12,200, y que por esta razon se sacaba á subasta por el tipo de capitalizacion:

Considerando que no resulta que el comprador tuviese parte en el hecho que motivó la alteracion del tipo, y por ello, no solo deben serle devueltas las cantidades que tenga entregadas por cuenta del precio, sino que hizo suyos legalmente los frutos y tiene derecho al abono de las mejoras ejecutadas, en la finca como poseedor de buena fé, y el importe de los perjuicios.»

Otro de 30 de Junio de 1868. Por error en la renta que sirvió de base para la capitalizacion, alterando tambien el tipo de la subasta, se declaró la nulidad de la venta, por los motivos siguientes:

«Considerando que arrendada la finca de que se trata desde 5 de Junio de 1857 por término de 20 años y cantidad de 11,712 rs., correspondientes á 583,60 céntimos en cada uno, debió ser este el tipo para la subasta, y no el de 1,200 rs. de la tasacion, toda vez que esta era menor que la capitalizacion de aquella renta:

Considerando que los peritos que fijaron dicha tasa de 1,200 rs., deduciéndola de la renta calculada de 30 rs. ánuos, cuando existia renta muy superior, *cometieron un error sustancial que afecta la existencia y validez del contrato de venta* de la citada finca y produce su nulidad, la cual por este motivo fué oportunamente reclamada antes de recaer su aprobacion.»

(1) Entre las varias sentencias, en que mas ó menos directamente se establece esta jurisprudencia, pueden verse las dos que siguen:

R. dec.-sent. del Consejo de Estado, de 30 de Enero de 1865. El tercer considerando, dice así: «Considerando que el error en la capitalizacion de la renta de una finca de bienes nacionales, hecha para su venta, solo podria influir en la validez de ésta, segun el derecho comun, si produjese la alteracion del justo precio en mas de la mitad, y las demandas de lesion por esta causa son improcedentes, conforme al citado art. 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, que es además la sesta de las condiciones especiales y espresas de la venta de que se trata.»

Sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just., de 7 de Octubre de 1869. Dice así en el 2.º: «Considerando que el *error en la capitalizacion* de una finca de bienes nacionales, cualquiera que sea la cantidad en que consista, *no dá lugar á la rescision ni anulacion del contrato, segun jurisprudencia del Consejo de Estado*, fundada en el artículo 170 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.»

(1) Esta doctrina tiene en su apoyo las dos resoluciones siguientes:

R. decr.-sent. del Consejo de Estado, de 12 de

Con casos prácticos se comprenderá perfectamente la teoría de esta doctrina. Se tasa una finca por 20, y se capitaliza por 15, mediante error en la renta, debiendo serlo por 25; se anuncia bajo el tipo de 20, que es el precio que resulta mas alto en virtud de ese error, y se remata por 22: aunque escede del tipo de la subasta, es nula la venta por error esencial en el precio; el tipo debió ser 25, y el Estado no puede vender por un precio inferior. Pero se remata la finca por 26: válida la venta, porque cubre el tipo mas alto entre la tasa y la capitalizacion, rectificado el error en esta padecido, y se llenan de hecho las condiciones legales.

Otro caso. Se tasa la finca por 20, y se capitaliza por 15, debiendo serlo por 18 segun su renta verdadera: como de todos modos el tipo mayor es la tasacion, no invalida la venta el error, accidental en este caso, relativo á la renta y á la capitalizacion.

Otro caso, y es el último. Se tasa la finca por 20, y se capitaliza por 25, debiendo serlo por 15: se anuncia la subasta por el tipo de los 25, que á consecuencia del error padecido resulta el mayor, y en el remate se cubre y aun se puja este precio: tambien en este caso se considera ese error accidental, y es válida la venta. El comprador debió enterarse de lo que compraba, y las demandas de lesion son inadmisibles.

Creemos que tal sea el criterio que ha prevalecido en las resoluciones antes indicadas, á las cuales están ajustados estos casos prácticos. De todos modos la cuestion estará subordinada á la justificacion de los hechos, y á la apreciacion que de ellos hagan la Junta superior de ventas y el Ministro de Hacienda en la via gubernativa, y hoy la sala 4.ª antes la 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia en la contenciosa. Se trata, además, de un contrato de buena fé, y esta circunstancia debe tenerse presente para no invalidar las ventas sino en los casos en que el error influya esencialmente en la alteracion del precio.

El error en la tasacion de las fincas es mas trascendental que el de la capitalizacion, por lo mismo que es mas difícil de justificar y apreciar. Puede proceder de que los peritos no hayan tomado en consideracion todas las circunstancias de la finca, ó no se hayan hecho cargo de la calidad del terreno, ó se hayan equivocado en la cabida, y aun tambien de que hayan tomado una finca por otra. Como todos estos casos afectan mas directamente al error en la cosa, pues de él nace el error en el precio, se ha tratado de ellos en el párrafo anterior.

Y no solo de la tasacion y capitalizacion puede nacer el error en el precio; sino tam-

---

Junio de 1859. El comprador reclamó indemnizacion por error en el precio, mediante á que la finca no producia la renta que sirvió de tipo para la capitalizacion; pero se desestimó su instancia por que la finca se sacó á subasta por la tasacion, que no fué impugnada. Dice así:

«Considerando que la capitalizacion en las fincas de bienes nacionales que se sacan á la venta, tiene solo por objeto fijar si la licitacion debe hacerse bajo el precio de la misma capitalizacion, ó bajo el de la tasacion:

Considerando que la casa acerca de que versa este litigio, se sacó á subasta por la cantidad de tasacion, por ser mayor que la de la capitalizacion:

Considerando que en la cantidad de la tasacion no ha habido error ni engaño, como resulta de los autos:

Considerando que la tasacion de la finca es lo que representa su verdadero valor:

Considerando que el art. 157 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se refiere solo al caso en que la finca haya desmerecido de su valor en el tiempo que media entre la tasacion y la toma de posesion por el comprador, caso diferente del que en este pleito se ventila:

Considerando que, con arreglo á las citadas leyes 64 y 65 del título 5.° de la Partida 5.ª, en tanto há lugar á la rebaja proporcional del precio en que se hizo la venta, en cuanto hay error en el precio verdadero de la cosa vendida; lo que no ha sucedido en la enajenacion de la casa de la calle de Silva.»

Sentencia de la Sala 3.ª *del Trib. Sup. de Justicia de* 12 *de Julio de* 1869.—Por error en la renta se capitalizó la finca por un precio mas alto del que correspondia, cuyo precio sirvió de tipo para la subasta. La finca quedó rematada por una cantidad aun mucho mayor. Se declaró válida la venta, estableciéndose sobre esta cuestion en el considerando 3.° lo que sigue:

«Considerando que si bien la referida finca fué tasada en 12,500 rs., con espresion de su calidad, clase y situacion, y capitalizada por su arriendo de 750 rs. en 13,500, saliendo por la última cantidad á la licitacion como la mayor, en cumplimiento de los arts. 106, 110, 123 y 179 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, habiéndose adjudicado á Melgarejo en 97,000 reales, *el que se haya tomado la capitalizacion como tipo para la subasta no altera las condiciones propias y esenciales de esta clase de contratos*, ni tampoco los derechos y obligaciones de los contratantes.»

bien de haberse alterado alguna de las condiciones de la subasta, como las relativas á las cargas que han de rebajarse del precio ó han de quedar de cuenta del comprador (1). Siempre que resulte que el comprador ha de pagar contra su voluntad mas ó menos de lo estipulado, procede la nulidad de la venta por alterarse uno de los requisitos esenciales del contrato, cual lo es el precio convenido.

§. 4.° *Falta de consentimiento.*

Sabido es que el consentimiento es una de las bases cardinales de todo contrato consensual, cual lo es la compra-venta. Tiene que recaer necesariamente sobre la *naturaleza* del mismo contrato, sobre la *cosa* y sobre el *precio*, y tambien sobre los *pactos y condiciones* con que en su caso haya de ejecutarse. Si no hay perfecto acuerdo de las partes acerca de todos estos estremos, el contrato no puede perfeccionarse; y si se ha llevado á efecto, la nulidad es indeclinable, como lo es igualmente cuando ha concurrido cualquier causa ó accidente que vicia el consentimiento. Estos principios del derecho comun son tambien aplicables á las ventas de que tratamos. Puede consultarse acerca de ellos la seccion V del artículo **COMPRA-VENTA** por derecho comun (pág. 577 del tomo XI).

En cuanto á la *naturaleza ó clase del contrato* no puede haber dificultad en estas ventas. El Estado *vende*, y así lo anuncia públicamente; y el que concurre á la licitacion sabe que va á *comprar*, y no á otra cosa. Por esto no se ha suscitado, ni podia suscitarse cuestion alguna acerca de la falta de consentimiento sobre dicho estremo.

Tampoco puede haberla sobre las *condiciones* del contrato. Estas se hallan determinadas en las leyes y disposiciones que tratan de la materia: se insertan tambien las más capitales en los anuncios para la subasta; y á ellas se somete el comprador por el hecho de tomar parte en la licitacion.

La falta de consentimiento en estas ventas puede recaer, y recae con frecuencia, *sobre la cosa* y *sobre el precio*. Va inherente al *error*, de que hemos tratado en los dos párrafos que preceden. Siempre que hay error en la cosa ó en el precio, que legalmente deba subsanarse, falta el consentimiento de la parte que resulta perjudicada y procede la nulidad ó la indemnizacion.

Téngase presente, como ya se ha indicado en otro lugar, que el comprador espresa su consentimiento al hacer la postura y aceptar el remate, y el vendedor al aprobarlo y acordar la adjudicacion de la finca por medio de la Junta superior de ventas. Perfeccionado así el contrato, quedan obligados á su cumplimiento tanto el Estado como el comprador, y solo por abandono de este, no pagando el primer plazo, ó por cualquier vicio esencial que haga nulo el consentimiento, ya sea sobre la cosa ó sobre el precio, puede quedar sin efecto la venta (1). Acerca de los casos en que se supone dicha falta de consentimiento,

(1) *R. dec.-sent. del Consejo de Estado de 21 de Julio de 1863.* Se anunció la finca con una carga que debia rebajarse; pero despues no se rebajó por haberse redimido. El comprador no se avino á pagar el precio íntegro, y se declaró nula la venta, revocando la Real órden que la habia aprobado, mandando devolver al comprador la multa que se le habia exigido por falta de pago del primer plazo, con indemnizacion de perjuicios, por los fundamentos siguientes:

«Considerando que estipulado en la primera venta del molino en cuestion que el pago del precio á plazos se verificaria con deduccion en cada uno de ellos de la parte de capital del censo correspondiente á dicha finca, no pudo exigirse en el primero al comprador el plazo íntegro á título de que ya no pesaba sobre aquella dicha carga, *porque evidentemente se alteraba con ello uno de los requisitos esenciales del contrato, que es el precio*:

Considerando que no se ocurre á este inconveniente con la ventaja que de la libertad de la finca resulta al comprador, porque si bien esta ventaja es en sí un beneficio, deja de ser tal desde que, como sucede en este caso, no se acepta.»

(1) Reales decretos-sentencias del Consejo de Estado de 22 de Mayo de 1862, 9 de Enero de 1865, 10 de Junio de 1867, y otros. En este último se dice lo siguiente:

«Considerando que subastadas con las formalidades establecidas las fincas objeto de la demanda, y aprobados los remates por la autoridad competente que ordenó la adjudicacion, quedó perfeccionado el contrato de compra-venta, y ligados así la Administracion como los compradores al cumplimiento de sus respectivas obligaciones:

Considerando que un contrato así otorgado *solo puede anularse* ó quedar sin efecto *por haberse procedido con un vicio esencial, ó por el abandono del comprador.*»

y sus efectos, véanse los dos párrafos anteriores.

En todo caso, el consentimiento mútuo del comprador y del vendedor, que en estos contratos se requiere como requisito esencial para su validez, solo puede recaer sobre lo que ha sido comprendido espresamente en los anuncios de la subasta, prévia su tasacion en venta y renta. El Estado no vende lo que no anuncia con dichas formalidades, y el comprador no puede pretender que ha adquirido lo que no fué objeto de la tasacion ni de la subasta (1). No se encuentra en este caso lo que está adherido á la cosa vendida de un modo fijo y permanente, de suerte que constituya por necesidad parte integrante y esencial de la misma, en razon al uso á que estaba destinado. Por esta consideracion se declaró que en la venta de una casa fragua estaban comprendidos el fuelle y yunque, colocados en la misma, aunque en la valoracion de la finca no se hizo espresion detallada de dichos artefactos (2).

§. 5.° *Defectos en las subastas.*

La subasta pública es una de las principales garantías contra los abusos, que pudieran cometerse en los contratos que á ella se subordinan. Por esto la exige la ley como solemnidad para todas las ventas de bienes nacionales, cuya nulidad será por tanto indeclinable cuando se omita ese requisito esencial, del que no puede prescindir la Administracion por no estar en sus facultades (1).

Y no solo es nula la venta cuando se omite la subasta; sino tambien cuando se cometen en ella vicios ó ilegalidades que la hacen ineficaz. Estos vicios pueden nacer de la falta de publicidad, de la de libertad en los licitadores, ó de no haberse llenado todos los requisitos y solemnidades que la ley prescribe para tales actos.

En los párrafos 4.° y 6.° de la seccion III se espuso cuanto está prevenido acerca de la publicidad que ha de darse á los anuncios y al acto de la subasta, y demás solemnidades con que esta ha de celebrarse. Si no se han publicado dichos anuncios, ó la publicacion no se ha hecho con la anticipacion, en los lugares y en la forma que previene la ley (2), lo propio que cuando no se ha celebrado la doble ó triple subasta que corresponde segun los casos, la venta lleva en sí el vicio radical de no haberse guardado las solemnidades y requisitos legales, que son la garantía del Estado, y no puede por tanto estimarse como válida.

Es preciso, sin embargo, no confundir lo que es esencial de estos actos, con las circunstancias accidentales de los mismos. Es requisito esencial la publicacion de los anuncios en el *Boletin oficial*, y en el lugar donde se halle la finca; pero es una circunstancia accidental el sitio en que hayan de fijarse los edictos, por no haberlo determinado la ley: será, por tanto, nula la venta si se ha omitido aquella solemnidad, al paso que no puede producir este efecto el que se hayan fijado los

(1) *Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Febrero de 1870.* El comprador de una dehesa de bienes de propios pretendió que le correspondia la percepcion de cierto cánon, que pagaban los cultivadores de algunos terrenos de la misma, de cuyo cánon no se habia hecho mencion en los anuncios para la subasta, ni en la tasacion de la finca. Se desestimó dicha pretension por los motivos siguientes:

«Considerando que para la subasta de los bienes á que se refiere la ley de 1.° de Mayo de 1855, es requisito esencial que preceda su tasacion en venta y renta y el anuncio bien espresivo de lo que se vende, á fin de que pueda recaer ciertamente el consentimiento mútuo de comprador y vendedor, que en estos contratos se requiere:

Y considerando que del espediente gubernativo resulta que el cánon que se demanda no fué tasado ni espresamente anunciado para la subasta, como que se ignora todavia quiénes sean los que lo hayan redimido y cuáles los pagadores, la verdadera cantidad en que consiste y lo que importa; y segun esto, no ha podido preceder el concierto necesario para la compra y venta del mismo.»

(2) Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 25 de Enero de 1867.

(1) Reales decretos-sentencias del Consejo de Estado de 7 de Abril de 1866 y 11 de Enero de 1867. Este último recayó en pleito promovido por la Administracion para que se declarase, como se declaró, la nulidad de una venta hecha de Real órden sin subasta pública.

(2) Sobre falta de publicidad de los anuncios puede verse el Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 17 de Agosto de 1866, en pleito promovido por el ayuntamiento de Noblejas.

edictos en la cabeza del distrito municipal ó en otro pueblo del mismo donde se halle situada la finca (1). Es tambien requisito esencial la celebracion simultánea de la doble ó triple subasta, segun sea la finca de menor ó de mayor cuantía; pero es accidental, y no invalida la venta, la falta de espresion en los anuncios del punto donde aquellas hayan de celebrarse, puesto que la misma ley lo tiene designado (2). En una palabra, únicamente la omision de cualquiera de los requisitos, consignados espresamente en la ley ó instruccion, para la publicidad y celebracion de estos actos, debe estimarse como vicio radical que invalida la venta: no la de aquellos que no pueden considerarse como solemnidad del acto, por no haberles atribuido la ley este carácter.

Las violencias, coacciones y demás abusos que puedan cometerse para alejar á los licitadores, darán tambien lugar á la nulidad de la venta, además de la responsabilidad criminal en que incurrirán sus autores. Coartada la libertad de aquellos, queda defraudado el fin que se propuso la ley. Además, no puede prevalecer lo que es consecuencia de un acto ilícito, ni lo que se ha obtenido por medios reprobados.

La incapacidad del postor es igualmente motivo de nulidad. Véase lo que sobre este particular se espuso en el §. 6.° de la seccion III, al tratar de las personas que pueden hacer postura (1).

§. 6.° *Nuevas cargas, no rebajadas del capital.*

El art. 174 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 dispone que, «cuando un gravámen ó derecho cualquiera sea reclamado contra la finca ó fincas vendidas, y fuese declarado legítimo, ya gubernativamente, ya por los tribunales, el comprador podrá reconocerlo á condicion de que se le rebaje el capital del importe de las obligaciones que tenga pendientes,» esto es, de los plazos que esté adeudando del precio del remate; «ó manifestar su negativa para que la Junta superior acuerde lo que crea conveniente.» Queda, pues, á eleccion del comprador el aceptar ó nó el gravámen, que no era conocido al venderse la finca, y que despues fué declarado legítimo gubernativa ó judicialmente: si lo acepta, queda válida y subsistente la venta, debiendo rebajarse del precio de la finca

(1) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado, de 5 de Abril de 1865.* Reclamada la nulidad de una venta por no haberse fijado anuncios en el lugar donde radicaba la finca, resultó que éstos se habian publicado por el alcalde pedáneo en una aldea dependiente de aquel, y en cuyo término estaba la finca. Declarada gubernativamente la nulidad de la venta, por dicha sentencia se dejó sin efecto la Real órden, y se declaró válida aquella por los motivos siguientes:

«Considerando que no está previsto en dicha instruccion (la de 31 de Mayo de 1855) el caso de este pleito en lo tocante á fijacion de edictos, pues se limita á prevenir que se verifique en el pueblo donde radiquen las fincas que hayan de subastarse, sin que se estienda á determinar lo que haya de hacerse cuando éste pueblo, como aquí sucede, sea parte y no cabeza de un distrito municipal:...

Considerando que es del interés del Estado no anular las ventas de esta clase sino en los casos en que el vicio de ellas se halle plenamente justificado, pues solo así podrá evitarse el retraimiento mayor ó menor de los licitadores que lo contrario produciria.»

(2) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado, de 16 de Agosto de 1866.* Declarada la nulidad de una venta, entre otras razones, por no haberse espresado en el anuncio inserto en el *Boletin oficial*, que la subasta tendria lugar tambien en la cabeza del partido, se revocó la Real órden, consignándose sobre dicho particular lo que sigue:

«Considerando, por consiguiente, que desde el momento en que se publicó la subasta del monte Carrascal en el *Boletin* de la provincia, y mucho mas desde que se circuló por el juez de primera instancia de la capital del partido, era conocido que en esta debia celebrarse una de las tres subastas simultáneas, lo cual se demostró por el hecho de haber sido aquel punto el en que se presentaron mas licitadores y en donde subió mas la subasta:

Considerando además que ni la ley ni la instruccion mencionadas han declarado que sea motivo suficiente para anular una venta la falta de espresion del punto en que hubiera de hacerse, ni habria sido racional, cuando la misma ley lo habia designado préviamente.»

(1) Además del Real decreto-sent. del Consejo de Estado, que allí se citó, véase el de 10 de Octubre de 1868, en pleito promovido por D. Cárlos Lopez Navarro. Se declaró, entre otras cosas, la nulidad de la venta de unas fincas, por haber intervenido el comprador como actuario en la subasta, pues, aunque adquiridas aparentemente por terceras personas, resultó que lo fueron para dicho actuario, y que con su dinero se pagó el primer plazo.

el capital de la carga con que queda gravada; y si se niega á aceptarlo, la Junta superior de ventas acordará lo que crea conveniente. Este acuerdo tendrá que ser necesariamente dejar sin efecto la venta, devolviendo al comprador la cantidad que haya satisfecho y los gastos de la subasta, con abono del 5 por 100 anual por vía de intereses si reintegra las rentas ó frutos percibidos (1). Solo podria quedar subsistente la venta en este caso, si el Estado y el acreedor ó censualista convinieran en redimir el gravámen ó imponerlo sobre otra finca, dejando libre la vendida.

En el primero de dichos casos deberá practicarse la liquidacion de la carga, en la forma que se espuso en el §. 9.° de la seccion III, y otorgarse nueva escritura para el reconocimiento del gravámen, y su inscripcion en el registro de la propiedad. En el segundo, si se deja sin efecto la venta, se inscribirá esta resolucion en dicho registro, luego que cause estado, y se anunciará de nuevo la subasta de la finca, con espresion de la carga á que está afecta, y de que su capital se rebajará al comprador del precio del remate.

Están esceptuados de esta regla los censos enfitéuticos. Si el Estado vende como libre ó en pleno dominio una finca, sobre la cual solo tiene el dominio útil, es nula la venta, y no puede dejarse subsistente aun cuando el comprador se prestase á reconocer el dominio directo y pagar sus pensiones (1).

§. 7.° *Competencia para conocer de las incidencias de ventas.*

En el artículo **COMPETENCIA ADMINISTRATIVA** (2) se trató ya esta materia, en cuanto conducia al objeto del mismo. Aunque sigue rigiéndose por los principios que allí se espusieron, debemos ampliarla en este lugar, para hacernos cargo de algunas disposiciones publicadas y de la jurisprudencia establecida con posterioridad, y de otras que se refieren concretamente al objeto del presente artículo, por cuya circunstancia no se hizo en aquel, ni debió hacerse, mérito de ellas.

Entre las atribuciones, que el art. 96 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 confiere á la Junta superior de ventas de bienes na-

(1) *Real decreto-sent. del Consejo de Estado de 11 de Julio de* 1865. Sus considerandos y la parte dispositiva dicen así:

«Visto el art. 174 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Considerando que el Estado vendió el arbolado de la dehesa titulada *Raposeras* sin limitacion ni carga alguna:

Considerando que despues de celebrada la venta se ha declarado gubernativamente que sobre dicho arbolado existe un derecho á favor de los propietarios del suelo, que limita los que adquirió el comprador:

Considerando que si éste se halla conforme en aprovechar el arbolado con las mismas limitaciones que lo aprovechaba el ayuntamiento de la ciudad de Mérida, tiene derecho á que se haga en el precio del remate la rebaja que previene el artículo 174 de la citada instruccion;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, Vengo en dejar sin efecto la Real órden de 22 de Julio de 1863; y en declarar que D Alvaro Sanchez Barrena puede conservar el arbolado de la dehesa titulada *Raposeras*, reconociendo el derecho declarado á favor de los dueños del suelo, rebajándose el capital á que éste ascienda de las obligaciones que tiene pendientes; y en caso de que no lo acepte con las espresadas condiciones, se declara sin efecto la venta, devolviéndose al comprador la cantidad que ha satisfecho y gastos de la subasta, con deduccion del importe líquido de su disfrute en el tiempo que haya poseido el arbolado, y el abono del interés del 5 por 100 anual en el propio tiempo.»

(1) Art. 2.° de la Real órden de 18 de Octubre de 1862, y *Real decreto-sent. del Consejo de Estado de 15 de Abril de* 1867. Este en sus considerandos 3.° y 4.° establece lo siguiente:

«Considerando que subrogada la nacion en los bienes y derechos de las comunidades religiosas, vendió aquellos censos (*eran enfitéuticos ó foros*) en el año 1846 á D. Antonio Felipe Gonzalez, causante de D. Jacobo Ayala, y habiéndolo hecho 13 años despues de los Propios de Villabarúz sobre que pesaban aquellas cargas, sin tener en cuenta la anterior enajenacion, ni espresar que solo se vendia el dominio útil, con arreglo á lo dispuesto en la Real órden de 18 de Octubre de 1862, la venta de dichas fincas era nula:

»Considerando que esta declaracion no podia evitarse por el allanamiento que el comprador de las fincas hiciera de reconocer el gravámen y pagar sus pensiones, ya porque los términos de la Real órden de 18 de Octubre son absolutos, y ya tambien porque la rebaja de los capitales en la forma que se proponia y habia de hacerse perjudicaba grandemente los intereses del Estado y del municipio de Villabarúz »

(2) Seccion IV, §. 2.°, prohibicion 4.ª (*Página 101 del tomo XI.*)

cionales, se halla la de entender en la resolucion de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas y censos, inclusas las que nazcan de las ventas verificadas á consecuencia de los decretos de 1820 y 19 de Febrero de 1836. En virtud de esta declaracion, de acuerdo con otras anteriores, que se espusieron en el lugar antes citado, es un punto incuestionable, segun el derecho constituido, que corresponde á la Administracion activa, y en su caso á la contenciosa, el conocimiento de todas las incidencias de ventas, por mas que en el rigor de los principios esta materia debiera ser de la competencia de los tribunales de justicia. Pero así se halla dispuesto, y está además confirmado por la jurisprudencia constante del Consejo de Estado (1).

Dicho punto no ofrece dificultad en principio ó como regla general. La dificultad nace de la calificacion de lo que son *incidencias de ventas* para los efectos de la competencia. Generalmente los compradores de bienes nacionales tienen interés en que la Administracion resuelva las cuestiones que se promuevan sobre tales bienes, ya para sustraerse de la accion inflexible de la justicia administrada por los tribunales, ya por ser aquella via mas espedita y menos dispendiosa; y como por otra parte los funcionarios administrativos suelen propender al ensanche de sus atribuciones, es muy frecuente el que se promueva y sustancie como incidencia de venta lo que realmente no tiene este carácter. De aquí la multitud de competencias entre las autoridades administrativas y las judiciales, y la necesidad de deslindar las atribuciones de unas y otras en esta materia.

Este deslinde se hizo por las Reales órdenes de 14 de Junio de 1848, 25 de Enero de 1849 y 20 de Setiembre de 1852, y por el artículo 10 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850, reproducido en el 15 de la de 25 de Junio de 1870. Segun esta disposicion, corresponden al órden administrativo la venta y administracion de los bienes desamortizados; declarando á la vez como consecuencia de esta regla, que las contiendas que sobre incidencias de subastas de los mismos bienes ocurran entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventilarán ante las corporaciones y con sujecion á los trámites que dispongan las leyes que regulan estos servicios, y que las cuestiones sobre dominio ó propiedad, cuando lleguen al estado de contenciosas, pasarán á los tribunales de justicia á quienes corresponda.

Partiendo de este principio las Reales órdenes antes citadas, y concretando mas los casos, declararon que correspondia al conocimiento de los consejos provinciales, y del Real en su caso, por la via contenciosa, todo lo relativo á la validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, á la interpretacion de sus cláusulas, á la designacion de la cosa enajenada, declaracion de la persona á quien se vendió, y ejecucion del contrato: esto es, todas las cuestiones contenciosas, relativas á la validez, inteligencia y cumplimiento de las subastas de dichos bienes y actos posesorios que de ellas se deriven, hasta que el comprador sea puesto en posesion pacífica de los mismos; y al de los juzgados y tribunales de justicia competentes las que versen sobre el dominio de los mismos bienes, y cualesquiera otros derechos, que se funden en títulos anteriores ó posteriores á la subasta, ó sean independientes de ella.

De lo espuesto se deduce que solo pueden reputarse como incidencias de las ventas, para los efectos de la competencia, las cuestiones relativas á la validéz, inteligencia y cumplimiento del contrato de venta, hasta dejar al comprador en quieta y pacífica posesion de lo comprado; y que no tienen este carácter las que sean independientes de la subasta, y las que versen sobre la propiedad ó sobre otros derechos reales á que estén afectas las fincas vendidas. Aquellas cuestio-

(1) Reales decretos á consulta del Consejo de Estado, *de 25 de Noviembre de* 1863, decidiendo una competencia entre el gobernador de Orense y el juez de primera instancia de Trives; *de 5 de Marzo de* 1864, decidiendo otra entre los mismos; *de 16 de Junio de* 1807, decidiendo otra entre el gobernador de Zaragoza y la Sala 2.ª de aquella Audiencia; *de 30 del mismo mes y año*, decidiendo otra entre el gobernador de la Coruña juez de Padron; y otras muchas.

nes son de la competencia de la Administracion activa, y en su caso de la contenciosa, ejercida esta, no ya por los consejos provinciales y el Real, como se dijo en las disposiciones antes citadas; sino por el Tribunal Supremo, como se espondrá en el párrafo siguiente; y las segundas son de la competencia de los tribunales de justicia, si bien debiendo preceder en su caso la reclamacion gubernativa de que luego hablaremos.

Aunque son claras y precisas estas reglas, el interés individual y aun tambien el de la misma Administracion suele bastardearlas, queriendo convertir en incidencias de ventas cuestiones que realmente no tienen este carácter; pero la jurisprudencia del Consejo de Estado vá fijando su recta inteligencia, esplicándolas con su imparcial criterio en la decision de las muchas competencias que sobre esta materia se suscitan entre las autoridades administrativas y las judiciales. Además de las decisiones ya espuestas en el lugar antes citado del artículo **COMPETENCIA ADMINISTRATIVA**, debemos hacernos cargo en este lugar de algunas otras, que conducen al fin indicado de deslindar las atribuciones de la Administracion y de los tribunales de justicia en un asunto de tanta importancia. Veamos, pues, la jurisprudencia establecida á consulta del Consejo de Estado.

Toda reclamacion que tienda á anular ó dejar sin efecto la venta de una finca ó redencion de un censo otorgada por el Estado, debe reputarse como incidencia de estos actos, y es de la competencia de la Administracion. No deben, por tanto, los tribunales de justicia conocer de las demandas que lleven en sí directa ó indirectamente la accion de nulidad de dichos contratos, ó en que se debata la eficacia y validéz de los mismos, y sea necesario apreciar esta circunstancia para el fallo, aunque la accion se deduzca por un tercero. La razon es porque, segun las disposiciones antes citadas, «á la Administracion toca conocer de las cuestiones que se promuevan sobre validéz ó nulidad, inteligencia, designacion de persona ó cosa, y efectos de los contratos de ventas de fincas y censos desamortizados y redencion de estos (1).» No puede contrariar dicha competencia la circunstancia de que la finca no se halle en poder del que la subastó, por haberla enajenado á un tercero, puesto que la Administracion es la única autoridad que debe decidir sobre la legitimidad del título con que se vendió, ó sobre la validéz de la venta; y la devolucion de la finca en su caso no embaraza ni se opone al ejercicio de las demás acciones, que asistan al particular agraviado (2).

Si el dueño de terrenos colindantes con otros vendidos por el Estado pretende que el comprador de estos le ha despojado de parte

(1) *Reales decretos á consulta del Consejo de Estado, de* 25 *de Noviembre de* 1863 *y* 5 *de Marzo de* 1864, decidiendo á favor de la Administracion dos competencias entre el gobernador de Orense y el juez de Puebla de Trives; y *otro de* 24 *de Febrero tambien de* 1864, decidiendo la promovida entre el gobernador de Búrgos y el juez de Sedano, á consecuencia de haber admitido éste una demanda ordinaria de dos pueblos que tenian mancomunidad de pastos con otro, para que se les declarase libres de este gravámen mediante á que habia sido vendida la finca con que el pueblo demandado contribuia á dicha mancomunidad. Esta decision á favor de la Administracion se fundó en lo siguiente:

«Considerando que la pretension de los pueblos de Espinosa y Villaescusa, aun cuando no ataque directamente á la venta de la finca del Rad, es evidente que la cuestion que en ella ha de ventilarse está íntimamente ligada con la de las condiciones con que se efectuó la enajenacion:

Considerando que mientras no se resuelva de una manera definitiva la subsistencia ó nulidad de la mencionada venta, y por tanto se prive para siempre al pueblo de Orbaneja de la posesion de la finca, ó se le restituya, es estemporánea, y por tanto no suficientemente justificada la actual pretension de los pueblos de Espinosa y Villaescusa:

Considerando que esta cuestion prévia de la validéz ó nulidad de la venta de la finca es de la incumbencia de las autoridades y funcionarios á quienes toca aplicar la ley de 1.° de Mayo de 1855, en virtud y con arreglo á la cual tuvo lugar la enajenacion.»

Véase tambien el *Real decreto de* 20 *de Mayo de* 1867, decidiendo á favor de la Administracion una competencia suscitada entre la Audiencia y el gobernador de Valladolid.

(2) *Real decreto de* 21 *de Febrero de* 1867, decidiendo á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el gobernador y el juez de Castellon, con motivo de un interdicto de recobrar interpuesto por Vicente Ballés contra el alcalde de Cabanes, por haberle obligado á devolver una finca, cuya subasta fué anulada por la Junta superior de ventas.

de aquellos, ó de alguna servidumbre ú otros derechos, y reclama su reintegro, no podrá utilizar el interdicto de despojo ni otra accion en los tribunales ordinarios, siempre que haya dado lugar á ello un acto del comprador derivado de la subasta. En estos casos la reclamacion constituye una cuestion sobre los límites de la finca vendida por el Estado, ó sobre la estension de los derechos trasmitidos por éste en la venta, y en tal concepto se refiere á una incidencia del espediente de subasta de la misma finca, de que corresponde conocer á la autoridad administrativa, con arreglo al art. 96, párr. 8.° de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 y demás disposiciones antes citadas (1).

Son igualmente puntos incidentales de la venta, segun la citada Real órden de 25 de Enero de 1849, la designacion de la cosa enajenada y la declaracion de la persona á quien se vendió. La cuestion que se reduce á saber si una misma finca ha sido, ó no, vendida por la Hacienda á dos personas distintas, tiene por objeto la resolucion de dichos dos puntos, y por consiguiente es de la competencia de la Administracion (2). Lo es igualmente, por la propia razon de llevar en sí la designacion de la cosa enajenada, la que versa sobre si ciertos terrenos están ó no comprendidos en una finca vendida por el Estado (3).

En una palabra, se reputan incidencias de las ventas todas las cuestiones sobre la estension y límites de las fincas y derechos vendidos por la nacion, y demás que no pueden resolverse sin que preceda la designacion de la cosa, y corresponde por tanto decidirlas á las autoridades administrativas, ya se promuevan por los mismos compradores, ó bien por un tercero (1). Y no obsta para ello el que la cuestion adquiera el carácter de contenciosa, pues en este caso corresponde su decision á los tribunales contencioso-administrativos (2).

Tambien debe considerarse como incidencia de la venta, y de la competencia por tanto de la Administracion, cualquiera cuestion que se promueva sobre actos posesorios derivados de la propia subasta, y no de títulos anteriores ó posteriores á la misma, é independientes de ella. Se halla en aquel caso la reclamacion que deduzca un tercero contra el comprador de bienes nacionales puesto en

(1) Dos Reales decretos *de 30 de Setiembre de* 1663, decidiendo á favor de la Administracion una competencia entre el gobernador de Jaen y el juez de la Carolina, y otra entre el gobernador de Leon y el juez de Sahagun: *otro de 9 de Junio de* 1865, decidiendo la suscitada entre el gobernador y el juez de Búrgos; y otros

(2) Reales decretos *de 19 de Diciembre de* 1866 *y 25 de Noviembre de* 1867, decidiendo á favor de la Administracion una competencia entre el gobernador de Avila y el juez de Piedrahita, y otra entre el gobernador y el juez de Búrgos.

(3) *Id. de 23 de Marzo de* 1864, decidiendo á favor de la Administracion una competencia entre el gobernador y la Audiencia de Madrid: *otro de 15 de Junio de* 1868, decidiendo la suscitada entre el gobernador de Leon y el juez de Valencia de D. Juan; y otras decisiones.

(1) Reales decretos *de 18 de Marzo*, 24 *de Abril y* 20 *de Octubre de* 1864, 10 *de Enero y* 1.° *de Diciembre de* 1865, y otros, decidiendo á favor de la Administracion las competencias entre el gobernador de Huesca y el juez de Fraga, el gobernador de Guadalajara y el juez de Sacedon, el gobernador y la Audiencia de Albacete, el gobernador de Toledo y el juez de Lillo, y el gobernador de Ciudad-Real y el juez de Alcázar de San Juan. Dió lugar á la decidida en 20 de Octubre de 1864 un interdicto de recobrar entablado por un tercero contra el comprador de una finca del Estado por haber cortado unos pinos en terreno, que aquel pretendia ser de su propiedad, y éste de la finca comprada. La decision se fundó en los siguientes considerandos:

«1.° Que Julian Bañon, uno de los demandados en el interdicto, aparece como comprador al Estado de la dehesa de Pinar Doncel, y en el término de este nombre está la tierra en que se supone cometido el despojo:

2.° Que la sentencia que en el interdicto recaiga, puede por lo tanto afectar á la venta hecha por el Estado, declarando los límites de la finca comprada:

3.° Que teniendo por objeto la presente cuestion averiguar si en aquella venta se comprendió ó no la tierra en que ha tenido lugar el hecho que motiva el interdicto, está reducida á la designacion de la cosa enajenada, por lo que es incidental de la venta.»

(2) Reales decretos *de 16 de Junio de* 1867 *y* 30 *de Enero de* 1868, decidiendo á favor de la Administracion una competencia entre el gobernador y la Audiencia de Zaragoza, y otra entre el gobernador de Cádiz y el juez de Medinasidonia: *otro del Gobierno provisional de 14 de Febrero de* 1869, decidiendo la suscitada entre el gobernador de Zamora y el juez de Toro: *otro del Poder ejecutivo de 10 de Abril de* 1869, decidiendo la promovida entre el gobernador de Orense y el juez de Carballino; y otros.

posesion de la finca comprada, pretendiendo que éste le ha despojado de la que aquel tenia de la misma finca, cuando no invoca título alguno legítimo de propiedad, independiente de la venta hecha por el Estado, y el comprador no se halla todavía en la quieta y pacífica posesion de la finca (1).

Pero, en todo caso, si la cuestion es ocasionada por hechos del comprador, independientes de la subasta, y ejecutados cuando ya se hallaba en la quieta y pacífica posesion de la finca que el Estado le vendió, como por ejemplo, si hace en ella alguna obra que impide á un tercero el uso de una servidumbre que pretende tener sobre la misma finca, altera sus linderos, pone mojones, se apropia terrenos en el concepto de pertenecer á aquella, etc., las reclamaciones á que estos hechos den lugar no pueden estimarse como incidencias de las ventas hechas por el Estado, ni de la competencia por tanto de la Administracion. Esta no puede conocer de las cuestiones que se promuevan con motivo de los actos posesorios que de la venta se deriven, ni en reclamacion de cualquiera otro derecho, despues de puesto el comprador en quieta y pacífica posesion de lo que compró. Tales cuestiones son de la competencia esclusiva de la jurisdiccion ordinaria, ya versen sobre la propiedad ó derechos reales, que siempre corresponden á los tribunales de justicia, ya por la razon indicada de haberlas motivado actos del comprador posteriores á la subasta é independientes de ella (1).

Y no solo son de la competencia de la jurisdiccion ordinaria dichas cuestiones, cuando nacen de actos del comprador; sino tambien cuando dá lugar á ellas un tercero, contra el cual aquel tiene que reclamar, bien para reivindicar terrenos que pretende le fueron vendidos por el Estado, bien por turbarle en la posesion de lo comprado, ó privarle de sus servidumbres y derechos. Cesa la competencia de la Administracion, como se ha dicho, luego que entrega la finca al comprador, prévio su deslinde y designacion de la cosa y

(1) *Dos reales decretos de 7 de Octubre de* 1863, decidiendo á favor de la Administracion dos competencias entre el gobernador de Valladolid y el juez de la Mota del Marqués. Son iguales los considerandos de una y otra: el 2.° dice así:

«Que la reclamacion deducida por la via sumarísima de interdicto por Torices, colono ó arrendatario que parece haber sido del pedazo de tierra á que se refiere, con motivo de haberle arado el actual arrendatario de Manrique, comprador que consta documentalmente ser al Estado de la tierra á que pertenece el pedazo, no puede menos de estimarse como una cuestion sobre actos posesorios derivados de arriendo ó de subasta de bienes nacionales, de los comprendidos en la Real órden de 20 de Setiembre de 1852, ya por no invocarse por el querellante título alguno legítimo anterior ó posterior á la venta é independiente de ella, ya por no hallarse aun el comprador en la posesion pacífica que señala la misma Real órden como límite de la competencia administrativa en esta clase de negocios, únicos casos de escepcion en que se atribuye su conocimiento á la jurisdiccion ordinaria.»

(1) *Real decreto de 26 de Febrero de* 1861, decidiendo á favor de la autoridad judicial una competencia entre el gobernador de Valladolid y el juez de Torquesillas. Dice así:—«Considerando:

«1.° Que la presente cuestion no puede estimarse incidental de la venta hecha por el Estado, puesto que es posterior á ella y ocasionada por un acto del comprador independiente de la subasta:

2.° Que una vez puesto el comprador en quieta y pacífica posesion de la finca que el Estado le vendió, cesa la competencia de la Administracion para conocer de las cuestiones que puedan promoverse con motivo de los actos posesorios que de la venta se deriven:

3.° Que la servidumbre sobre cuya posesion se litiga constituye un derecho real, del que deben conocer los tribunales de justicia, limitándose la accion de la autoridad administrativa á la designacion de la cosa enajenada y á la ejecucion del contrato.»

Esta misma jurisprudencia ha prevalecido en las decisiones, dictadas á consulta del Consejo de Estado como todas las demás, de las muchas competencias que por idénticos motivos se han suscitado entre las autoridades administrativas y las judiciales, venciendo siempre estas en tales conflictos. Pueden verse las decididas por *Reales decretos de* 13 *de Mayo de* 1864, entre las mismas autoridades que la anterior; *de* 3 *de Junio del propio año*, entre el gobernador de Alicante y el juez de Jijona; *de* 30 *de Agosto tambien de* 1864, entre el gobernador y el juez de Huesca; *de* 12 *de Febrero de* 1865, entre el gobernador de Madrid y el juez de Alcalá de Henares; *de* 18 *del mismo mes y año*, entre la Audiencia de Zaragoza y el gobernador de Teruel; *de* 20 *tambien de Febrero de* 1865, entre el gobernador de Madrid y el juez de Colmenar Viejo; *de* 30 *de Junio de* 1865, entre la Audiencia y el gobernador de Granada; *de* 25 *de Julio de* 1868, entre el gobernador de Guipúzcoa y el juez de San Sebastian; *de* 27 *del mismo mes y año*, entre el gobernador de Murcia y el juez de Cieza; *por el del Regente del Reino de* 4 *de Diciembre de* 1869, entre el gobernador de la Coruña y el juez de Padron; y otras.

de sus derechos caso necesario, hasta dejarlo en la quieta y pacífica posesion de la misma. Todas las cuestiones que se promuevan despues, cualquiera que sea el que las promueva, ya no pueden estimarse como incidencias de las ventas, aunque se originen de actos posesorios, que de ellas se deriven: son pura y simplemente contiendas ó litigios entre particulares y sobre derechos privados, puestos bajo el amparo de los tribunales de justicia, sin perjuicio de la eviccion á que pueda estar tenida la Hacienda (1).

Para la recta aplicacion de la regla, sobre la cual está basada la jurisprudencia que acabamos de esponer, de que «una vez puesto el comprador en quieta y pacífica posesion de la finca que el Estado le vendió, cesa la competencia de la Administracion para conocer de las cuestiones que puedan promoverse con motivo de los actos posesorios que de la venta se deriven,» es preciso determinar si el comprador se halla ó no en la quieta y pacífica posesion. Esta duda, que ocurre con frecuencia, ha sido tambien resuelta por la jurisprudencia del Consejo de Estado en la decision de varias competencias. Se reputa al comprador en quieta y pacífica posesion, cuando ha trascurrido un año y un dia desde que se le entregó la finca comprada, sin que haya sido perturbado en ella (2); pero no en el caso de que no haya trascurrido dicho tiempo (3).

Y aunque haya trascurrido el año y el dia, tampoco se le considera en la posesion pacífica, para los efectos de que se trata, siempre que haya pendiente alguna reclamacion del mismo comprador ó de un tercero sobre nulidad de la subasta, deslinde ó designacion de la cosa, ó cualquiera otra incidencia de la venta entablada oportunamente (1).

Dijimos al principio de este párrafo, conforme á las disposiciones que allí se citaron, que no tienen el carácter de incidencias de ventas, ni son por tanto de la competencia de la Administracion, las cuestiones relativas á bienes nacionales, que versen sobre el dominio de los mismos bienes, ó sobre cualesquiera otros derechos reales que se funden en títulos anteriores ó posteriores á la subasta, y sean independientes de ella. Esta doctrina ha sido tambien confirmada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, declarando de la competencia de los tribunales de justicia ó de la jurisdiccion ordinaria cuantas cuestiones se han promovido por la vía contencioso-administrativa sobre la propiedad de cualquiera de los bienes vendidos por el Estado, ó reclamando el dominio útil ó cualquier otro derecho real en virtud de títulos anteriores á la subasta, cuando alguno de los interesados no se ha conformado con la resolucion gubernativa dictada de Real órden. En todos estos casos debe respetarse el estado posesorio creado por la subasta; así es que, aun cuando por la resolucion gubernativa se declare la nulidad de la venta, si el comprador no se conforma con ella, no puede ser desposeido de la finca sino en virtud de sentencia ejecutoria dictada por el tribunal de justicia. Dicha resolucion no puede producir en este caso otro efecto que el de dar por terminada la re-

(1) Reales decretos decidiendo competencias, á consulta del Consejo de Estado, *de* 12 *Febrero de* 1865, entre el gobernador de Guadalajara y el juez de Sacedon; *de* 9 *de Marzo de* 1865, entre el gobernador y el juez de Leon; 20 *de Noviembre tambien de* 1865, entre el gobernador de la Coruña y el juez de Betanzos; 23 *del propio mes y año*, entre el gobernador de Segovia y el juez de Santa María de Nieva; 25 *de Julio de* 1868, entre el gobernador de Guipúzcoa y el juez de San Sebastian; 20 *de Agosto de* 1868, entre el gobernador de Albacete y el juez de la Roda; y otros.

(2) Decreto del Gobierno prov., á consulta del Consejo de Estado, *de* 29 *de Noviembre de* 1868, decidiendo una competencia entre la Audiencia y el gobernador de la Coruña.

(3) Real decreto á consulta de id., *de* 15 *de Junio de* 1868, decidiendo una competencia entre el gobernador de Leon y el juez de Valencia de Don Juan. Su considerando 3.° dice así: «Que si bien cuando los compradores de bienes nacionales se hallan en la quieta y pacífica posesion de sus fincas corresponde á los tribunales de la jurisdiccion ordinaria entender en las cuestiones á que esta misma posesion dé lugar, en el caso presente, *por no haber trascurrido el año y el dia desde que el comprador entró á poseer la finca, no puede suponérsele en su quieta y pacífica posesion.*»

(1) Reales decretos *de* 23 *de Marzo de* 1864, decidiendo una competencia entre la Audiencia y el gobernador de Madrid; *de* 16 *de Junio de* 1867, decidiendo otra entre el gobernador y la Audiencia de Zaragoza; 30 *del mismo mes y año*, decidiendo la suscitada entre el gobernador de la Coruña y el juez de Padron; y otras.

clamacion gubernativa, que debe preceder á la judicial (1).

Indicarémos, por último, que las cuestiones que se refieren á la declaracion de si ciertos bienes están ó no comprendidos en las leyes de desamortizacion, ó esceptuados de la venta, así como todas las que versan sobre la inteligencia de dichas leyes, ya se promuevan antes ó despues de la venta, corresponden, segun las prescripciones de las mismas y la jurisprudencia constante, á la Ad-

(1) *Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 15 de Julio de 1866*, en el pleito promovido por D. Santiago Collantes y otros contra la Real órden que declaró de la propiedad de varios vecinos de Cobeja ciertos terrenos de propios, en el concepto de haberlos roturado legalmente, y anuló la venta de los mismos terrenos hecha á favor de aquellos. Dice así:

«Considerando que la reclamacion de los vecinos de Cobeja envolvió una cuestion de propiedad, fundándose en títulos anteriores á la subasta, independientes de ella, y cuya validez ó eficacia solo pueden apreciar los tribunales de justicia, y no la jurisdiccion contencioso-administrativa:

Considerando que por lo mismo que dicha reclamacion, cuando pasase á contenciosa, no podia ser resuelta por la administracion en esta via, la Real órden que decidió sobre ella no puede tener el carácter de jurisdiccional, y sí solo el de ultimacion del espediente gubernativo que habilitaba á los reclamantes para acudir á los tribunales de justicia entablando la oportuna demanda contra los poseedores de las fincas que no se conformasen con lo decidido:

Considerando que no puede ser obstáculo para el procedimiento indicado la circunstancia de no haber sido negada gubernativamente la reclamacion, como dispone el art. 173 de la instruccion de 1.° de Mayo de 1855, porque en casos como el presente no basta que la Hacienda se allane, sino que es tambien precisa la conformidad del que con ella ha contratado, y en cuyo perjuicio cederia el allanamiento; pues lo contrario supondria que quedaba roto el contrato por solo la voluntad de una de las partes:

Considerando, en su consecuencia, que por la declaracion de nulidad de las ventas, que se hizo en la espresada Real órden, no debió alterarse el estado de las cosas con respecto á los compradores que no se allanaron tácita ó espresamente, ni desposeerles gubernativamente, mientras no recayese sentencia favorable á los vecinos de Cobeja;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, vengo en declarar que la Real órden de 27 de Noviembre de 1862 solo tuvo el carácter de resolucion del espediente gubernativo necesario para que los reclamantes, supuesto el no allanamiento de los compradores á la esplícita conformidad de la Hacienda en deshacer la venta, acudiesen á los tribunales de justicia á usar de su derecho contra ellos como poseedores de las fincas; y en mandar que por lo que toca á D. Santiago Collantes y consortes, que no se conformaron con la resolucion gubernativa, se repongan las cosas al estado que tenian cuando se les desposeyó, sin perjuicio de las acciones que correspondan á los vecinos de Cobeja, de las cuales podrán usar cómo y donde proceda.»

Otro Real decreto-sentencia de 16 de Julio de 1868, en pleito entre D. Miguel Ortega y otros, la Administracion y los vecinos de Baños, sobre declaracion de derechos por roturaciones en terrenos del espresado pueblo. Se establece la misma doctrina que en el anterior.

Sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup de Just. de 8 de Noviembre de 1869, en el pleito contencioso administrativo promovido por el marqués de Remisa, sobre nulidad de las roturaciones hechas por varios vecinos de Estremera en la dehesa de los Arenales. Despues de establecer en el primer considerando que una Real órden declaratoria de derechos causa estado, y no puede ser reformada por otra posterior, la cual de consiguiente carece de efecto, sobre el punto de que tratamos dice lo siguiente:

«Considerando, sin embargo, que declarándose en esa Real órden la preferencia de los derechos de ciertos roturadores de terrenos en la dehesa de los Arenales sobre los adquiridos por el que la compró al Estado, esa resolucion depende del exámen de títulos anteriores á la subasta, independientes de ella, por lo cual, segun lo dispuesto en la ley de 20 de Febrero de 1850, Real órden de 20 de Setiembre de 1852 y Real decreto de 21 de Mayo de 1853, la cuestion en el fondo no es de la competencia de la administracion, sino de los tribunales de justicia, como lo ha decidido el Consejo de Estado en las sentencias que en los resultandos se citan: (*Son las dos que preceden en esta nota.*)

Considerando, por consecuencia, que dicha Real órden de 6 de Julio de 1866, mandada cumplir por la de 22 de Julio del siguiente año, no puede tener otro efecto que dar por terminada la reclamacion gubernativa, y que una resolucion de esa clase carece de eficacia para alterar el estado creado por la subasta y la posesion del comprador;

Fallamos que debemos declarar y declaramos subsistente la Real órden contra la que se ha interpuesto la demanda; entendiéndose que no tiene otro carácter que el de resolucion final del espediente gubernativo para que los interesados puedan ejercitar sus acciones donde y segun corresponda, sin perjuicio de la posesion del comprador.»

Y en cuanto á que las cuestiones contenciosas sobre el dominio ó propiedad, y sobre la existencia de servidumbres de carácter privado y demás derechos reales, son de la competencia de los tribunales ordinarios en todo caso, véanse, entre otras, la decision de la competencia entre el gobernador de Guipúzcoa y el juez de San Sebastian, por *Real decreto de 25 de Julio de 1868*; el considerando 5.° de la *sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 11 de Marzo de 1869*; y la *sentencia de la misma Sala de 9 de Julio de dicho año.*

ministracion activa, y en su caso y lugar á la contenciosa, sin perjuicio de reservar las de propiedad á la jurisdiccion ordinaria (1).

Téngase tambien presente que segun el artículo 173 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, «no se admitirá por los jueces de primera instancia, ni otras autoridades judiciales, demanda alguna contra las fincas que se enajenen por el Estado, sin que el demandante acompañe documento de haber hecho la reclamacion gubernativamente y sídole negada.» Por Real órden de 11 de Abril de 1860 se encargó á los tribunales y juzgados el cumplimiento de esta disposicion, cuya puntual observancia fué recordada por otra de 7 de Noviembre de 1867, mandándose á la vez que se publicara aquella en la *Gaceta* para conocimiento de los jueces que la hubiesen olvidado. Y últimamente, por el artículo 1.° del decreto del Regente del reino de 9 de Julio de 1869, se ha declarado en su fuerza y vigor el citado art. 173, y demás disposiciones dictadas sobre el particular, al mandar de nuevo que los jueces y tribunales no admitan demandas contra la Hacienda pública sin que se acredite haber precedido la reclamacion de los derechos litigiosos en la via gubernativa.

En cumplimiento de estas disposiciones, en los casos en que corresponda á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de las cuestiones litigiosas sobre bienes nacionales vendidos por el Estado, los jueces deben repeler de oficio las demandas, cuando no se presente con ellas el documento que acredite haber precedido la reclamacion gubernativa; y si no lo hacen, el demandado podrá utilizar la escepcion dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Pero la omision de este requisito no es motivo suficiente para fundar cuestion de competencia reclamando la Administracion el conocimiento, por más que en su caso pueda motivar la nulidad de los procedimientos, lo cual solo es apreciable por el tribunal que entienda del negocio (1). Todo lo relativo á esta materia, con espresion de la forma en que ha de entablarse el espediente gubernativo y término para resolverlo, se espondrá con la estension conveniente en su lugar oportuno. Véase **DEMANDA CONTRA EL ESTADO.**

Debemos indicar aquí, sin embargo, como más concreto al caso, que no solo ha de preceder la reclamacion gubernativa cuando la demanda se dirija contra la Hacienda, ó contra las fincas vendidas por el Estado; sino tambien en los demás casos en que con motivo de la venta se entablen reclamaciones contenciosas (2), y aun cuando estas sean entre particulares, siempre que la Hacienda pública tenga interés en el asunto por estar obligada á la eviccion y saneamiento, ó por cualquier otro motivo. Si la resolucion gubernativa, favorable á la parte que la promovió, causa perjuicio á un tercero, podrá éste entablar la vía judicial presentando el documento que acredite aquella resolucion, sin promover nueva instancia toda vez que el caso está ya resuelto en la vía gubernativa (3). Cuando la cuestion sea pura y sim-

(1) *Real decreto-sent. del Consejo de Estado de 2 de Mayo de 1866*, en pleito promovido por D. Manuel de Lara y Cárdenas: *Real decreto de 20 de Agosto de 1868*, decidiendo á favor de la Administracion una competencia entre el gobernador de Vizcaya y el juez de Valmaseda; y otras resoluciones dictadas á consulta de dicho Consejo.

(1) Reales decretos decidiendo competencias, *de 12 de Febrero de 1865*, entre el gobernador de Guadalajara y el juez de Sacedon; *de 28 de Julio de 1868*, entre la Audiencia de Albacete y el gobernador de Murcia; *de 10 de Noviembre de 1869*, entre el gobernador de Tarragona y el juez de Montblanch; y otros muchos.

(2) *Real decreto de 9 de Julio de 1862*, decidiendo una competencia entre el gobernador de Córdoba y la Audiencia de Sevilla. En el considerando 2.° se dice lo siguiente:

«Considerando que aún cuando la redaccion literal del art. 173 de la intrruccion de 31 de Mayo de 1855 solo habla de *demandas contra las fincas*, se ha de entender de toda demanda, por cuanto el espíritu del artículo, como el de todas las demás disposiciones administrativas análogas, es que no se inicien y menos dé curso á ningun género de reclamaciones contenciosas, sin que el caso que las motive haya sido resuelto antes en la esfera gubernativa.»

(3) Sobre la inteligencia que respecto de este punto ha de darse al art. 173 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, véase el considerando 3.° del Real decreto-sent. del Consejo de Estado de 15 de Julio de 1866, inserto anteriormente en la nota de la pág. 199.

plemente entre particulares sobre derechos privados, sin que pueda resultar perjuicio á la Hacienda, no debe promoverse dicha resolucion gubernativa, aunque la cuestion sea sobre fincas enajenadas por el Estado.

Es tambien especial del caso de que tratamos el plazo de seis meses, á contar desde el dia de la adjudicacion de la finca, para incoar las reclamaciones que con arreglo al art. 173 antes citado deben dirigirse á la Administracion antes de entablar en la vía judicial demandas contra las fincas enajenadas por el Estado. Pasado dicho término los jueces ordinarios deben admitir las acciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fincas, sin necesidad de que haya precedido la resolucion gubernativa, debiendo sustanciarse estas cuestiones con los poseedores, citándose de eviccion á la Hacienda, si estos lo solicitan oportunamente. Así lo ordenó el artículo 9.° del Real decreto de 10 de Julio de 1863, fundándose, segun se espresa en la esposicion que le precede, en las justas razones que siguen:

«Por último, necesario es fijar un término dentro del cual concluyan las atribuciones de la Administracion para entender en las cuestiones que susciten los que, considerándose dueños de fincas vendidas por el Estado, ó pretendan que les corresponde su dominio, ó que al menos tienen un derecho real sobre ellas. Como esto es una escepcion del derecho comun, segun el que debe conocer de estas cuestiones el órden judicial, es necesario reducirla á un término muy corto, pasado el cual los tribunales sean reintegrados en sus naturales funciones, y no quede como ahora ilimitada tal facultad en la Administracion.»

Pero es de notar que al paso que estas razones se limitan á las demandas que puedan entablar los que pretendan les corresponde el dominio, ó un derecho real sobre los bienes vendidos por el Estado, en la parte dispositiva se hace estensiva la reduccion del plazo de los seis meses para incoar el espediente gubernativo á todas las reclamaciones, á que se refiere el art. 173 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855. Es verdad que este artículo habla solo de *demandas contra las fincas*, lo cual está en armonía con aquellas razones; pero, como hemos dicho antes, la jurisprudencia del Consejo de Estado lo ha hecho estensivo á toda clase de demandas, aunque no sean reivindicatorias ni sobre derechos reales. Sin embargo, creemos que dicho plazo de los seis meses es aplicable solamente á las demandas indicadas que se entablen por un tercero, el cual podrá despues hacer uso de su derecho contra el poseedor de la finca sin someterse préviamente á la resolucion gubernativa; y no á los compradores, que contrataron con el Estado, ni á sus causa-habientes, los cuales siempre que se crean con derecho para hacer alguna reclamacion contra la Hacienda por la vía judicial con motivo de la venta, tendrán que acudir préviamente á la vía gubernativa.

§. 8.° *Procedimientos y recursos.*

En el párrafo anterior hemos hecho el deslinde entre las cuestiones que deben reputarse como incidencias de las ventas de bienes nacionales, y de la competencia por tanto de la Administracion, y las que, por no tener aquel carácter, corresponden á la autoridad judicial, indicando tambien los casos en que estas han de someterse préviamente á la resolucion gubernativa. Réstanos esponer el procedimiento que ha de emplearse en aquellas, y los recursos que podrán utilizarse, designando á la vez las autoridades ó funcionarios á quienes corresponde conocer de dichas incidencias.

Estos funcionarios son: *en la via administrativa*, el jefe económico de la provincia y la junta provincial de ventas, para el efecto de instruir el espediente y emitir esta su dictámen acerca de la procedencia ó improcedencia de la reclamacion (1): la Direccion general de propiedades y derechos del Estado y la Junta superior de ventas, á la cual corresponde dictar la resolucion que estime justa (2); y el Ministro de Hacienda, para la re-

(1) Art. 100 de la instruc. de 31 de Mayo de 1855.

(2) Art. 96, núm. 8.° de id.

solucion definitiva, en alzada del acuerdo de dicha Junta superior (1): y *en la vía contenciosa*, en única instancia, antes el Consejo de Estado en Sala de lo contencioso (2); despues la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Justicia (3), y últimamente la Sala 4.ª del propio Tribunal, á la que se ha atribuido el conocimiento, en única instancia y en revision, de todos los recursos que con arreglo á la ley entablen contenciosamente los que se sintieren agraviados en sus derechos por resoluciones de la Administracion general del Estado, que sean definitivas (4).

Respecto de este último punto, las Reales órdenes de 14 de Junio de 1848, 25 de Enero de 1849 y 20 de Setiembre de 1852, y el art. 10 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850, atribuyeron la competencia á los consejos provinciales, y al Real en su caso; pero fué porque entonces los gobernadores de provincia estaban facultados para resolver definitivamente sobre algunas incidencias de ventas, y contra sus acuerdos podia acudirse por la vía contenciosa ante los consejos provinciales. Mas, posteriormente se quitó á los gobernadores esta facultad, atribuyéndose esclusivamente, como se ha dicho, á la Junta superior de ventas, por el núm. 8.º del citado art. 96 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, la resolucion de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas y censos, inclusas las pendientes de las verificadas á consecuencia de los decretos de 1820 y 1836, con el recurso de alzada para ante el Ministro de Hacienda; y desde entonces quedaron reformadas en este punto aquellas disposiciones, que solo están vigentes respecto á la clasificacion que hacen de los negocios que pertenecen á lo contencioso-administrativo y á lo judicial. Esta es tambien la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se espuso en la seccion II, del presente artículo, al tratar de las atribuciones de dicha Junta superior (*pág.* 111).

Sentados estos precedentes, veamos los procedimientos y recursos que pueden utilizarse.

Tanto los compradores, como los particulares, que se crean con derecho para deducir cualquiera de las reclamaciones que, segun lo espuesto en el §. anterior, deben considerarse como incidencias de las ventas de bienes nacionales, han de dirigir su solicitud á la Junta superior de ventas; pero presentándola en la administracion económica de la provincia, en que radique la finca, para el curso correspondiente. El jefe económico dispondrá que desde luego se dé cuenta á la junta provincial, la cual acordará la instruccion del espediente, haciendo que se unan á él los datos necesarios, acordando en su caso nuevas medidas ó reconocimientos del terreno, y pidiendo los informes oportunos á los peritos, comisionados de ventas, administracion económica y demás funcionarios que puedan ilustrar la cuestion. Y luego que, á su juicio, esté completa la instruccion del espediente, acordará la misma junta su dictámen sobre la reclamacion deducida ó cuestion que se ventile, y que con él se remita el espediente original á la Junta superior para su resolucion. Esta remision se hará por el jefe económico á la Direccion del ramo.

Recibido el espediente en este centro directivo, se le dará el curso correspondiente, ampliando su instruccion si fuese necesario, y oyendo el parecer de la Asesoría, hoy de la seccion de letrados, sobre los puntos de derecho, si su gravedad ó importancia lo requiere; y con el informe del negociado y dictámen del Director, se dá cuenta á la Junta superior de ventas para su resolucion. Esta se notifica administrativamente á los interesados, los cuales tienen el término de 60 dias, á contar desde el siguiente al de la notificacion, para alzarse ante el Ministro de Hacienda. Si trascurre dicho término sin interponer este recurso, causa estado en la vía administrativa el acuerdo de la Junta superior, como se dijo en el lugar antes citado de la seccion II, y debe llevarse á efecto, sin que

(1) Real órden de 20 de Agosto de 1866.
(2) Arts. 46 y 56 de la ley orgánica de dicho Consejo de 17 de Agosto de 1860.
(3) Decreto del Gob. prov. de 26 de Noviembre de 1868.
(4) Arts. 282 de la ley provis. sobre organizacion del poder judicial, de 15 de Setiembre de 1870.

pueda ya admitirse ningun otro recurso, ni revocarse por la misma Junta, pues solo puede serlo en su caso por el Ministro del ramo (1).

Interpuesto en tiempo el recurso de alzada, se pasa el espediente al Ministerio de Hacienda, por el cual, en los asuntos graves, suele pedirse informe al Consejo de Estado, ó á cualquiera de sus secciones, y en vista de todo se dicta de Real órden la resolucion definitiva. Esta resolucion se notifica tambien administrativamente á los interesados, y contra ella puede entablarse la vía contenciosa, hoy ante la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, como se ha dicho, dentro del plazo improrogable de seis meses, contados desde el dia de dicha notificacion (2). Trascurrido este plazo sin utilizar el indicado recurso contencioso, queda firme la resolucion administrativa, y ni aun por otra Real órden puede ser revocada (3).

Téngase presente, por último, que durante la vía contenciosa debe suspenderse, por regla general, la venta de la finca ó fincas de que se trate, hasta la resolucion definitiva del asunto. Así se mandó por Real órden de 31 de Agosto de 1856, para evitar los perjuicios que pudieran ocasionarse al Estado, si por consecuencia del litigio hubiese necesidad de dejar sin efecto la venta para entregar la finca al reclamante. Posteriormente se mandó por otra Real órden de 6 de Octubre de 1865, que no se suspenda la venta de fincas, cuya escepcion, por ser de aprovechamiento comun ó por otro motivo, se haya pedido oportunamente, aun cuando se halle pendiente recurso contencioso contra la Real órden que denegó dicha escepcion de la venta; fundándose para ello en que toda Real órden es ejecutiva, no obstante el espresado recurso, pues de lo contrario se veria embarazada á cada paso por la oposicion de los particulares la accion administrativa. Pero la esperiencia vino á demostrar que este sistema era ocasionado á graves conflictos y perjuicios, y para evitarlos se restableció sustancialmente la primera disposicion, ordenándose por el art. 4.° de la Real órden de 9 de Marzo de 1868, que no se acuerde ningun remate de fincas que estén pendientes de litigio, ó sean objeto de reclamacion gubernativa, hasta que esta sea resuelta de Real órden.

Y últimamente ha sido modificada esta disposicion por otra del Poder ejecutivo de 11 de Junio de 1869, por la cual, teniendo en consideracion, «que si por una parte es conveniente impedir que con recursos infundados y temerarios se paralice la desamortizacion, interesa por otra al Estado evitar, en cuanto sea posible, las anulaciones de ventas, por los perjuicios á que dan orijen,» se ha dispuesto que en los casos de alzada contra las resoluciones del Gobierno denegando la escepcion de la venta, cuando conste á la Administracion que se ha contestado la demanda, se suspendan los procedimientos para la enajenacion de las fincas, las cuales serán consideradas como litigiosas hasta que el pleito sea resuelto por sentencia. Aunque esta órden habla solo del caso en que se haya reclamado la escepcion de la venta de una finca por ser de aprovechamiento comun, en su espíritu es aplicable á todos los casos en que se litigue el mejor derecho á una finca, y así se practica. De consiguiente, una vez contestada la demanda, no deben enajenarse las fincas sobre que verse el litigio; y aun obrará la Administracion con prudencia suspendien-

(1) Real decreto de 21 de Mayo de 1853, y Real órden ya citada de 20 de Agosto de 1866.

(2) Real decreto citado de 21 de Mayo de 1853.

(3) Reales decretos-sents. del Consejo de Estado, *de 7 de Febrero de* 1862, en pleito entablado por D. Isidro Llamazares; *de 30 de Junio de* 1867, en el promovido por el ayuntamiento del Valle de Salazar; *sentencia de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 28 de Abril de* 1869, y otras. Esta última en los considerandos 1.° y 3.° dice lo siguiente:

«Considerando que, segun el art. 1.° de la Real órden de 20 de Agosto de 1866, los acuerdos dictados por la Junta superior de ventas de bienes nacionales dentro del círculo de sus atribuciones causan estado siempre que no sean reclamados en el plazo de 60 dias, contados desde el siguiente al en que administrativamente se notifiquen á los interesados:

Considerando que las providencias gubernativas que causan estado no pueden reformarse por la autoridad ó centro directivo que las dictó, y que las reclamaciones que ante las mismas se hacen con tal objeto no sirven para interrumpir el lapso del tiempo señalado para acudir á la vía contenciosa, segun lo tiene declarado el Consejo de Estado.»

do la venta en todos los casos en que haya pendiente reclamacion, ya sea gubernativa ó contenciosa, como se mandó por la Real órden antes citada de 9 de Marzo de 1868.

SECCION X.

DE LA VENTA DE CENSOS.

Al esponer en la seccion I del presente artículo cuáles eran los bienes declarados en estado de venta en concepto de nacionales, se indicó ya que estaban comprendidos en las disposiciones relativas á esta materia, no solo los prédios rústicos y urbanos; sino tambien los censos y foros constituidos á favor del Estado y de las corporaciones civiles y eclesiásticas que allí se designaron. De unos y otros se hizo mencion espresa en el art. 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, dictándose además en la propia ley y en la instruccion de 31 del mismo mes las reglas especiales, á que debia subordinarse la venta de dichos censos.

Pero antes de esponer estas reglas debemos consignar, que bajo la denominacion de *censos*, para los efectos de que se trata, se comprenden los enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, los *treudos*, los foros, los conocidos con el nombre de *carta de gracia*, y todo capital, cánon, renta ó prestacion de naturaleza análoga, que graven la propiedad inmueble, pertenecientes á *manos muertas* civiles y eclesiásticas (1).

Tambien están declarados como censos, para los mismos efectos, los arrendamientos anteriores al año 1800, que no escediendo de 1,100 reales anuales en su orígen ó el año último, hayan estado desde la citada época en poder de una misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna alteracion en las rentas en épocas anteriores. Lo propio se entenderá aunque el total de la renta esceda de 1,100 reales, si la finca está dividida entre dos ó mas partícipes, y cada uno de ellos no paga actualmente mas de la referida suma (1). Este derecho está limitado á los arrendamientos de prédios rústicos, y no á los de fincas urbanas, los cuales no pueden considerarse como censos, aunque el inquilinato no esceda de los 1,100 reales y cuente en una misma familia la antigüedad antes indicada (2). El contrato de tales arrendamientos ha de justificarse en la forma que se espondrá en su lugar oportuno (3). Véase **REDENCION DE CENSOS.**

Respecto de los censos conocidos con el nombre de *carta de gracia*, se consideran con este gravámen las fincas que adquirieron las manos muertas con el pacto de retroventa, cuando los vendedores se reservaron la posesion y el disfrute, pagando al comprador una pension anual; pero no aquellas, en que la enajenacion fué completa por la entrega de la cosa vendida al comprador, sin otra limitacion que el derecho de retroventa que se reservó el vendedor. Las fincas que se hallen en este último caso han de venderse como propias de la corporacion á que pertenezcan, si bien anunciándose en la subasta el pacto de retroventa, á que están sujetas, y que habrá de respetar el comprador, sin que por este gravámen se haga rebaja alguna en el precio. Y tambien se reputan como censos, que pueden redimirse, y en su caso enajenarse, valuándolos por cálculo prudencial, los derechos de retroventa, que las comunidades religiosas y demás *manos muertas* tengan sobre fincas agenas (4).

No deben considerarse como censos, para los efectos de que estamos tratando, las cargas que pesan sobre la propiedad particular, conocidamente aplicables á cubrir misas, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales, como se declaró por Real órden de 5 de Mayo de 1859, resolviéndose que dichas cargas no estaban comprendidas en las leyes

(1) Art. 1.° de la ley de 27 de Febrero de 1856, é id. de la de 11 de Marzo de 1859.

(1) Art. 2.° de la ley citada de 27 de Febrero de 1856.

(2) Real órden de 22 de Setiembre de 1855.

(3) Sobre este punto, véase el art. 14 de la ley, y el 13 de la instr. de 11 de Julio de 1856, y la Real órden de 24 de Diciembre de 1860.

(4) Real órden de 30 de Octubre de 1850, que puede verse en la sec. 2.ª de la *parte legislat.*

de desamortizacion de 1.° de Mayo de 1855, 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856. Mas, por otra Real órden de 27 de Agosto de 1862 se declaró, que la anteriormente citada «solo se refiere á las cargas que no son una verdadera imposicion de censo, y que son redimibles (y por tanto enajenables) todos los capitales que por la forma de su constitucion é imposicion sean verdaderos censos, cualquiera que sea su objeto, y aunque estén destinados sus réditos al cumplimiento de misas, aniversarios, sufragios y cargas espirituales.» Sin embargo, cuando dichas cargas sean de carácter puramente eclesiástico, deberán subordinarse á lo prevenido en el convenio celebrado con la Santa Sede en 16 de Junio de de 1867 sobre capellanías colativas, y en la instruccion para llevarlo á efecto de 25 del propio mes.

La redencion de los censos de toda clase es preferente á la venta: no pueden venderse sino en el caso de que el censatario no haya pedido la redencion. Para solicitarla se concedió el plazo de seis meses por el art. 7.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, cuyo plazo, por el art. 17 de la de 27 de Febrero de 1856, se amplió por seis meses más, á contar desde esta fecha, y se facultó al Gobierno para prorogarlo por otro término igual, como lo verificó por Real órden de 18 de Agosto del propio año; pero con esclusion de los arrendamientos anteriores al año 1800, mandando proceder á la venta de las fincas, á que estaban afectos. Por el art. 2.° de la ley de 11 de Marzo de 1859 se concedió un nuevo plazo de ocho meses á los censatarios de la península é islas Baleares, y de diez á los de Canarias, previniéndose que, trascurridos estos plazos, se procediera á la venta en pública subasta de todos los censos cuya redencion no se hubiera pedido. Y últimamente, por el artículo 9.° de la ley de presupuestos de 4 de Mayo de 1862 se dispuso lo siguiente: «Se abre nuevo plazo de un año, contado desde la publicacion de la presente ley, para que puedan ser redimidos, con sujecion á la de 11 de Marzo de 1859, los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, treudos, foros, los conocidos con el nombre de carta de gracia, y todo capital, cánon, renta ó prestacion de naturaleza análoga, pertenecientes al Estado, á beneficencia, á instruccion pública, y á manos muertas de carácter civil, cuyos bienes estén comprendidos en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, y 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856.»

Estos plazos empiezan á contarse, en los censos sobre que haya litigio pendiente, desde que se declare la ejecutoria, ó desde que el censatario se allane al reconocimiento (1); y respecto de los pertenecientes á manos muertas eclesiásticas, desde que se admita por Real órden la cesion y permutacion de los bienes eclesiásticos de cada diócesis, con arreglo al convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, como se dijo en el §. 2.° de la seccion I. Siendo de advertir que, como la citada ley de presupuestos de 1842, al abrir el nuevo plazo de un año, se limitó á los censos procedentes de manos muertas de carácter civil, para los de carácter eclesiástico rige el de 8 meses, señalado en la ley de 11 de Marzo de 1859, con arreglo á la cual deben redimirse y enajenarse estos censos, segun lo prevenido en la de 7 de Abril de 1861.

Pero trascurrieron todos los plazos antes indicados sin que un gran número de censatarios hubiese pedido la redencion, no obstante las ventajas que por dichas leyes se les concedieron. Estaba por tanto el Gobierno en el deber de proceder á la venta de tales censos, segun lo prevenido en las mismas leyes. Sin embargo, no podia desconocerse la conveniencia y utilidad de favorecer todavía la redencion, para librar á la propiedad inmueble de esos gravámenes; ni podia negarse tampoco á los censatarios el derecho de realizarla cuando lo creyeran conveniente, conforme á la naturaleza del contrato. Ambas consideraciones fueron atendidas y conciliadas por la ley de 15 de Junio de 1866. A este fin ordenó en su art. 1.°, que «el derecho de redimir los censos y demás cargas permanentes que correspondan al caudal de bienes declarados

(1) Art. 17 de la ley de 27 de Febrero de 1856.

en estado de venta y gravan la propiedad inmueble, podrá reclamarse hasta el acto de la subasta, debiendo suspenderse el remate si el censatario solicitase la redencion antes de haberse terminado;» esceptuándose de esta disposicion por el art. 4.° los arrendamientos anteriores al año de 1800, mediante á que el plazo de redencion de los mismos concluyó en 27 de Agosto de 1856, segun lo dispuesto en la ley de 27 de Febrero del mismo año.

Quedó así indefinidamente abierto el plazo para la redencion de los censos y cargas de toda clase, sin que se coartara por esto la facultad del Gobierno para enajenarlos. Tanto es así, que por el art. 6.° de la propia ley se mandó, que cuatro meses despues de publicada la misma, procediese la Administracion á la venta de dichos censos y cargas; pero con el carácter de *redimibles* que tienen por su naturaleza, cuya redencion podrán verificar en todo tiempo los censatarios al tipo de 3 por 100: tipo mucho más gravoso que el establecido para la redencion antes de la venta por el Estado, y para la venta misma, como luego veremos, lo cual debiera servir de aliciente á los censatarios para anticiparse á redimirlos. Y por Real órden de 17 de Enero de 1867 se dictaron las prevenciones oportunas para que no se dificultaran las redenciones, ni dejara de llevarse á efecto la venta de tales censos.

Aunque, segun el método de la ENCICLOPEDIA, de todo lo relativo á la *redencion de censos* se tratará en su artículo correspondiente, ha sido indispensable hacer aquí las anteriores indicaciones para demostrar, que el Gobierno se halla hoy facultado para proceder á la venta de los censos de toda clase, pertenecientes al Estado y á manos muertas civiles y eclesiásticas, por haber trascurrido los varios plazos concedidos para la redencion. Y concretándonos ya á la venta, que es el objeto del presente artículo, vamos á esponer la forma en que ha de verificarse.

Las subastas y tramitaciones para la enajenacion de dichos censos ó cargas se verificarán bajo la forma prevenida para la venta de bienes correspondientes á las mismas corporaciones, á que aquellos pertenezcan. Así lo dispone el art. 252 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855; pero estableciendo á continuacion las modificaciones y reglas especiales que exige la índole especial del caso. Veamos cuáles son estas modificaciones.

Se dijo en su lugar oportuno que la primera operacion, que debe practicarse para la venta de fincas, es la clasificacion, medida y tasacion de las mismas, y que la certificacion, que espiden los peritos, es la base de las actuaciones sucesivas. Como los censos representan un capital fijo, es escusada dicha operacion, pudiendo verificarse, como se verifica la capitalizacion de los mismos, segun está mandado, por sus réditos ó pensiones. De consiguiente, en lugar de aquella certificacion, y para sus propios efectos, se librará y unirá al espediente la de la capitalizacion del censo ó carga de cuya venta se trate (1).

Las capitalizaciones de los censos para la venta han de practicarse en los mismos términos que están prevenidos para la redencion (2). Los tipos que para ello se fijaron en la ley de 1.° de Mayo de 1855 é instruccion de 31 del propio mes, fueron modificados por el art. 1.° de la ley de 11 de Marzo de 1859. Segun esta, que es la vigente en el dia, dicha capitalizacion ha de hacerse sobre las bases siguientes:

1.° Los censos, cuyos réditos no escedan de 60 reales ánuos, al 8 por 100, á pagar precisamente al contado.

2.° Los censos, cuyos réditos escedan de 60 reales al año, se capitalizarán al 6 y medio por 100, para pagar al contado; y al 4,80 céntimos por 100, para pagar en el término de nueve años y diez plazos iguales.

3.° Los censos, cuyos réditos se paguen en especie, se regularán por el precio medio que esta haya tenido durante el último decenio (3) en el mercado de la cabeza del partido judicial, en cuyo territorio el censatario estuviese obligado al pago; y cuando los rédi-

(1) Art. 252 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.
(2) Art. 254 de id.
(3) Este decenio debe ser el de 1840 á 1850, segun lo establecido en el art. 4.° de la ley de 27 de Febrero de 1856, como se declaró por Real órden de 21 de Marzo de 1861.

tos, cánon ó pension consistan en un tanto de la produccion, si para reducirlos á tipo fijo no fuese posible indagar los productos del decenio, servirán los del quinquenio, y en su defecto los del último bienio.

4.ª Los censos, cuyo cánon ó interés anual esceda de 60 reales, y el tipo reconocido en la imposicion escediese del 6 y medio por 100, se venderán por el mismo tipo de la imposicion, si el pago se hiciese al contado; y al 5 por 100, si se verifica en nueve años y diez plazos iguales.

Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos, cuyo canon ó rédito no estuviese reconocido, se capitalizarán conforme á las dos reglas primeras (1). Lo propio se previno respecto de los arrendamientos anteriores al año 1800; pero debiendo procederse á la venta de las fincas á que estaban afectos, cuando no se ha pedido su redencion en tiempo oportuno, como se declaró por Real órden de 18 de Agosto de 1856, es consiguiente que, en vez de la capitalizacion, se practique la tasacion de las fincas en la forma prevenida para todas las de bienes nacionales.

Corresponde hacer la capitalizacion de los censos y librar la certificacion antes indicada á los jefes de las secciones de propiedades y derechos del Estado de las administraciones económico-provinciales, que han reemplazado en estas funciones á los contadores de Hacienda pública (2). Dicha certificacion debe contener todas las circunstancias que se espresan en el artículo 259 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855. (Véase en la seccion 1.ª de la *parte legislativa*.)

Estendido este documento, se pasará al comisionado de ventas para la instruccion del espediente de subasta, en el que ha de procederse en la propia forma que para la venta de fincas, celebrándose la doble ó triple subasta, segun sea de menor ó de mayor cuantía, esto es, segun esceda ó no de 20,000 reales el capital del censo, que resulte de la capitalizacion que ha de servir de tipo para la subasta (1); todo segun se espuso en el §. 4.º y siguientes de la seccion III, si bien con las variaciones siguientes:

En los anuncios para la subasta, además de todas las circunstancias contenidas en la certificacion antedicha, ha de espresarse: 1.º Que se admitirán posturas bajo los capitales formados por la administracion, al tipo de 8 por 100, cuando los réditos no escedan de 60 reales ánuos; y si esceden, á los de 6 y 1|2 y 4,80 por 100, segun haya de verificarse el pago al contado ó á plazos. Y 2.º, que será preferido el rematante que hiciere postura al capital formado al 6 y 1|2 por 100, siempre que ofrezca pagar al contado, y 100 reales menos que la cantidad ofrecida por los que hiciesen postura á pagar en nueve años y diez plazos (2).

Cuando se trate de enfitéusis, se advertirá tambien en el anuncio que lo que la nacion vende es el dominio directo, pues que el útil queda á favor del colono ó enfiteuta, el cual pagará la renta estipulada en el contrato que haya servido de base para la capitalizacion (3).

En el acto de la subasta de los censos cuyos réditos escedan de 60 rs., se admitirán las posturas que se hagan bajo las dos capitalizaciones indicadas del 6 1|2 y 4,80 por 100, segun se ofrezca pagar al contado ó á plazos. Los escribanos anotarán una y otra postura, y las mejoras ó pujas que se hagan á cada una de ellas. Y en los testimonios de remate se espresarán dichas dos capitalizaciones, la cantidad en que se hubiese rematado, y sobre qué tipo, si el de 6 1|2, ó el de 4,80 por 100, y á favor de quién quedó el remate; teniendo presente para ello que el preferente es, como se ha dicho, el que paga al contado, siempre que la cantidad ofrecida sea igual á la mayor postura hecha al tipo de 4,80 por 100, á pagar en nueve años (4).

Si en la primera subasta no se hiciere pos-

(1) Art. 256 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.
(2) Arts. 252, 253 y 258 de id., y 88, núm. 6.º del reglam. de 8 de Dic. de 1869.

(1) Art. 260 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, y 6.º de la ley de 11 de Julio de 1856.
(2) Art. 262 de la instr. de 31 de Mayo de 1855, y 1.º de la ley de 11 de Marzo de 1859.
(3) Art. 261 de dicha instruccion.
(4) Arts. 263, 264 y 265 de id.

tura admisible, se convocará á segunda, con la rebaja de una sesta parte de los capitales que sirvieron de tipo para la primera; y si tampoco se presentasen licitadores, se llevará á efecto otra tercera subasta, con rebaja de una quinta parte de los espresados capitales, subsistiendo por lo demás las mismas condiciones de los primeros remates, respecto de la preferencia á que tienen derecho los postores que ofrezcan pagar al contado (1).

Todo lo demás hasta el otorgamiento de la escritura de venta se practicará conforme á las reglas establecidas para la venta de fincas (2). Véase por tanto la seccion III.

SECCION XI.

DE LA VENTA DE MONTES PÚBLICOS.

Reservando para sus artículos respectivos todo lo que se refiere á la importancia y clasificacion de los montes públicos, su deslinde, y demás que con ellos tiene relacion en el órden jurídico, nos concretaremos á esponer aquí lo que se refiere directamente á la venta de los mismos, en concepto de bienes nacionales. Indicarémos, pues, cuáles son los montes, que pueden enajenarse, y la forma, en que ha de procederse á su venta.

De la desamortizacion general civil y eclesiástica, decretada por la ley de 1.° de Mayo de 1855, y por consiguiente de la venta de los prédios rústicos en ella comprendidos, se esceptuaron, por el párrafo 6.° del art. 2.° de dicha ley, los montes y bosques, cuya venta no creyera oportuna el Gobierno. No quedaron, pues, esceptuados de la venta todos los montes públicos; sino solamente aquellos, cuya conservacion creyera el Gobierno conveniente. Así es, que por circular de la Direccion general de ventas de bienes nacionales, de 4 de Junio de 1855, se encargó á los gobernadores de provincia, que no obstante lo que por punto general se establecia en la instruccion de 31 de Mayo anterior, suspendieran poner en venta ningun monte del Estado, de los pueblos, de los establecimientos públicos de beneficencia, instruccion y demás procedencias de bienes nacionales, hasta que, en vista del resultado de los trabajos forestales que ocupaban al Ministerio de Fomento, se determinara con aquel objeto el reglamento especial oportuno, ó la disposicion que se considerase mas acertada.

No era este punto de fácil resolucion, y como la ley lo habia encomendado al criterio del Gobierno, no es estraño que se apreciara de distinto modo por las diferentes administraciones que fueron sucediéndose en la gobernacion del Estado. De aquí el que se dictaran las varias disposiciones, que pueden verse en la seccion 3.ª de la *parte legislativa*, para hacer la clasificacion de los montes que habian de enajenarse, y los que debian esceptuarse de la venta, dando más ó ménos latitud á la desamortizacion de esta parte tan importante de la riqueza pública. Ultimamente, como para poner término á las encontradas opiniones sobre esta materia, y coartar la facultad discrecional del Gobierno, que hoy reformaba lo que ayer habia mandado, con la perturbacion consiguiente, se sometió la resolucion al poder legislativo, y en su virtud se dictó la ley de 24 de Mayo de 1865.

Por el art. 1.° de esta ley se dividieron los montes públicos en dos clases: 1.ª, montes del Estado; y 2.ª, montes de los pueblos y de los establecimientos públicos. Esta clasificacion, equivalente á la de *bienes del Estado* y de *corporaciones civiles*, que se hizo por el artículo 8.° de la ley de 11 de Julio de 1856, aunque dictada con distinto objeto, debe producir los mismos efectos que esta última respecto de las ventas, cuyos efectos pueden verse en el §. 6.° de la seccion I, y en la V, del presente artículo. Y segun el 1.° del reglamento de 17 de Mayo de 1865, se reputan *montes públicos*, no sólo los del Estado, los de los pueblos y corporaciones que dependen del Gobierno, esceptuados de la desamortizacion; sino tambien los que, declarados enajenables, no hayan pasado todavia á dominio particular.

Por el art. 2.° de dicha ley de 1865, y el

(1) Real órden de 13 de Marzo de 1861.
(2) Arts. 267 y 269 de la instr. de 31 de Mayo de 1855.

16 del reglamento de 1865 antes citado, quedaron esceptuados de la venta prescrita por el 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 los montes públicos de pinos, robles ó hayas, cualesquiera que sean sus especies, siempre que consten lo ménos de 100 hectáreas, debiendo acumularse los que disten entre sí ménos de un kilómetro, para computar dicha medida; y en la provincia de Canarias, los de pinos, fayas, laureles y brezos, que consten tambien de la espresada medida. No se hizo más que reproducir y confirmar lo que sobre este punto estaba ya mandado por el Real decreto de 22 de Enero de 1862 y la Real órden de esta misma fecha, que se hallan vigentes, como se deduce de las referencias que hace á estas disposiciones el citado reglamento, y por no ser contrarias á lo que se ordena en dicha ley de 1863.

Como consecuencia de todas estas disposiciones, y para su cumplimiento, se mandó formar un catálogo de los montes públicos, con distincion de los que sean propiedad del Estado en cada provincia, y los que pertenezcan á pueblos ó establecimientos públicos; pero comprendiendo en él solamente los esceptuados de la desamortizacion. Y se ordenó al propio tiempo, que todos los terrenos que no contengan pino, roble, ni haya, quedaban desde luego en estado de venta, sin necesidad de mas trámites ni declaraciones por parte del Ministerio de Fomento, ni de sus dependencias.

Sin embargo, como el ramo de montes depende de dicho Ministerio, cuando haya duda ó reclamacion acerca de si un monte es ó no de los esceptuados, no puede procederse á su venta sin que por él se haga la declaracion oportuna. En tales casos, el jefe económico de la provincia debe disponer que no se haga el anuncio de la subasta, ó que quede nulo si ya se hubiese publicado; y en el caso de estar celebrado el remate, dará parte inmediatamente á la Direccion general de propiedades y derechos del Estado, y á la de agricultura, industria y comercio, para que, poniéndose de acuerdo los Ministerios de Hacienda y de Fomento, se dicte la resolucion que proceda. Pero esto ha de entenderse respecto de los montes no enajenados hasta el 22 de Enero de 1862, pues á la vez se respetaron las ventas verificadas antes de esta fecha, prohibiéndose dar curso en el Ministerio de Fomento á las reclamaciones de escepcion, que se dirigieran contra ellas, aun cuando las fincas volviesen á ser anunciadas en subasta por quiebra de sus anteriores compradores. Véase, en la seccion 3.ª de la *parte legislat.*, la citada Real órden de 22 de Enero de 1862, en la cual se dan reglas para todos estos procedimientos y reclamaciones.

Resulta, pues, que las dependencias correspondientes del Ministerio de Hacienda quedaron autorizadas para sacar á la venta todos los montes públicos, con la sola escepcion de los de pinos, robles ó hayas, que por sí solos, ó unidos á otros que disten menos de un kilómetro entre sí, consten al menos de 100 hectáreas. La venta de dichos montes ha de verificarse en la propia forma y con los mismos requisitos y solemnidades que la de las demas fincas rústicas de bienes nacionales, celebrándose doble ó triple subasta, segun sean de menor ó de mayor cuantía, y teniendo presente si pertenecen al Estado ó á corporaciones civiles, para el efecto de determinar los plazos en que hayan de pagarse. De consiguiente, es aplicable á estas ventas cuanto se espuso sobre dichos estremos en las secciones III y V. Téngase tambien presente que, cuando el monte contenga arbolado, debe el comprador prestar la fianza, que se esplicó en el §. 1.° de la seccion IV, como la 7.ª de las obligaciones de los compradores.

Ultimamente, por el art. 12 de la ley de presupuestos de 29 de Mayo de 1868, se autorizó al Gobierno para que procediera desde luego á la venta de los montes del Estado, esceptuados de la desamortizacion, reservando solamente los que tengan reconocida importancia por declaracion facultativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con los de Hacienda y Marina. No es de nuestro propósito examinar aquí la conveniencia de esta medida, ni las razones que la aconsejaron. Limitándonos por ahora al derecho constituido, debemos observar que se refiere solamente á los *montes del Estado esceptuados de la*

desamortizacion; nada dice de los pertenecientes á los pueblos y á los establecimientos públicos, que fueron tambien esceptuados de la venta por la ley de 24 de Mayo de 1863: queda, por tanto, subsistente y en vigor la escepcion á estos relativa.

Al propio tiempo se mandó que la venta de dichos montes del Estado se verificara con las mismas formalidades que establecen la ley é instrucciones para la desamortizacion, que son las esplicadas en la seccion III, con la sola diferencia de que el precio del remate se realizará en cinco plazos iguales; el primero al contado, y los demas en cada uno de los cuatro años sucesivos, abonándose el interés máximo de 6 por 100 al año á los compradores que anticipen uno ó mas plazos. Nótese bien esta diferencia. Los montes de pinos, robles ó hayas, que son los esceptuados de la desamortizacion, pertenecientes al Estado, que se vendan en virtud de la autorizacion antedicha, concedida al Gobierno, han de pagarse en cinco plazos y cuatro años; y los montes que no sean de dicha clase se pagan en 15 plazos y 14 años, si son de mayor cuantía y pertenecen al Estado, y en 10 plazos y 9 años, si son de corporaciones civiles. Además, los compradores de aquellos tienen derecho á la bonificacion del 6 por 100 por los plazos que anticipen, y los de todos estos sólo á la del 5 por 100. En todo lo demás están sujetos á las mismas condiciones, inclusa la de prestar fianza, en su caso, por el valor del arbolado.

SECCION XII.

DE LA VENTA DE LAS FÁBRICAS DE SALITRE, AZUFRE Y PÓLVORA.

Al declararse libres desde 1.° de Enero de 1865, por la ley de 17 de Junio del año anterior, la fabricacion y venta de pólvora y materias esplosivas, que hasta entonces habian estado estancadas, se autorizó al Gobierno para enajenar en pública subasta las fábricas de salitre, azufre y pólvora, con cuanto á ellas perteneciera, esceptuando solamente las que se consideraseu necesarias para el servicio de guerra. Se mandó al propio tiempo que los terrenos y cotos de las mismas fábricas quedaran comprendidos en las disposiciones generales vigentes sobre desamortizacion y venta de los bienes del Estado.

En cumplimiento de esta ley, las dependencias del Ministerio de Hacienda se incautaron de dichas fábricas, escepto las que se reservaron para el servicio de guerra, recibiéndolas del cuerpo de Artillería, á cuyo cargo se hallaban; y en su consecuencia, por Real órden de 24 de Setiembre de 1867 se dictaron las reglas convenientes para llevar á efecto la enajenacion de las mismas. Estas reglas están acomodadas á las establecidas para la venta de los demás bienes nacionales, sin otras modificaciones que las que exigian las circunstancias especiales de las propiedades de que se trata. Dichas modificaciones están limitadas á los anuncios para la subasta, y á la fianza que en todo caso deben prestar los compradores para garantir el pago, en consideracion á la facilidad con que podrian inutilizarse ó sustraerse las máquinas y enseres de tales artefactos.

La subasta ha de anunciarse con tres meses de anticipacion, en vez de los 30 dias fijados para los demás bienes, verificándose el remate el dia que se señale, desde las doce á la una de la tarde. Y para que estas ventas tengan toda la publicidad posible entre las personas que puedan interesarse en la subasta, además de publicarse los anuncios en la *Gaceta* y *Boletines oficiales*, y en el lugar donde se halle la finca, se deben remitir con el propio objeto á los cónsules de España en el estranjero, á cuyo fin debe cuidar la Direccion del ramo de que con la anticipacion necesaria se remita por el Ministerio de Hacienda al de Estado suficiente número de ejemplares de cada anuncio de subasta, para que por este se dirijan á dichos cónsules. Salva esta mayor publicidad de los anuncios con plazo mas largo para que puedan interesarse en la subasta los estranjeros, en todo lo demás se procede en la propia forma prevenida en general para la venta de bienes nacionales, que hemos espuesto en la seccion III, con la doble ó triple subasta, segun sea de

menor ó de mayor cuantía la finca, y pagándose el precio en los mismos plazos establecidos para las fincas del Estado. Véase, en la seccion 4.ª de la *parte legislativa*, la Real órden citada de 24 de Setiembre do 1867.

Y en cuanto á la fianza antes indicada, debe ser esta equivalente á la mitad del importe del remate, y ha de prestarla el comprador antes de realizar el pago del primer plazo; sin perjuicio de la hipoteca especial, á que queda afecta la finca vendida, y del otorgamiento de los pagarés, obligándose al pago del precio de la misma en los plazos correspondientes. Dicha fianza puede constituirse en metálico; en títulos de la deuda consolidada ó diferida, acciones de carreteras, ú obligaciones de ferro-carriles; ó en fincas rústicas ó urbanas que radiquen en España, con los requisitos y solemnidades que para cada uno de estos tres casos se determinan en las reglas 6.ª á 9.ª inclusive de la propia Real órden de 24 de Setiembre de 1867. Su aprobacion corresponde al gobernador, hoy al jefe económico de la provincia, prévio informe de la seccion de propiedades y derechos del Estado y del fiscal respectivo. Y no puede alzarse hasta que la Hacienda reciba el total importe de los plazos, lo cual verificado, se acordará su cancelacion por el mismo jefe económico de la provincia.

Aprobada dicha fianza y verificado el pago del primer plazo, debe ponerse al comprador en posesion de la fábrica y de las pertenencias de la misma, que hubiere rematado, cuyo derecho perderá si deja de satisfacer alguno de los plazos sucesivos. En este caso, como en el de no pagar el primer plazo, procederá la declaracion de quiebra y nueva venta de la finca, con las responsabilidades consiguientes para el comprador, todo segun se espuso en la seccion VI.

SECCION XIII.

DE LA VENTA DE MINAS Y SALINAS DEL ESTADO.

Entre los bienes esceptuados de la desamortizacion y venta por el art. 2.º de la ley de 1.º de Mayo de 1855, se comprendieron *las minas de Almaden* y *las salinas*.

Por consiguiente, *en cuanto á minas*, quedaron desamortizadas y pudieron sacarse á la venta todas las del Estado, con esclusion de las de Almaden, únicas esceptuadas. Pero esta disposicion fué modificada y restringida por el art. 2.º de la ley de 11 de Julio de 1856, por el cual se mandó, que *la venta de las minas del Estado será objeto de leyes especiales*. Y por el art. 2.º de la instruccion de esta misma fecha se previno, que de cada una de dichas minas se formase por las dependencias respectivas una memoria con todos los detalles, antecedentes é informes facultativos y administrativos, la que deberá acompañarse al proyecto de ley que se presente á las Córtes, cuando se acuerde su enajenacion.

Las minas, cuya propiedad y esplotacion se reservó el Estado por el art. 75 de la ley vigente de minería de 6 de Julio de 1859, reformada por la de 4 de Marzo de 1868, son las siguientes: las de azogue de Almaden y Almadenejos; las de cobre de Riotinto; las de plomo de Linares y Falset; las de azufre de Hellin y Benamaurel; las de grafito ó lápiz-plomo, en el partido judicial de Marbella; las de hierro, que en Astúrias y Navarra están destinadas al surtido necesario de las fábricas nacionales de armas y municiones; las de carbon, situadas en los concejos de Morcin y Riosa, en la provincia de Oviedo, acotadas para el servicio del establecimiento de Trubia; y las de sal, beneficiadas por el Estado en diferentes puntos del reino. Por el art. 79 de la propia ley se reprodujo la disposicion antes indicada de que el Gobierno no podrá enajenar las minas del Estado sin estar autorizado por una ley especial.

Esta autorizacion la obtuvo el Gobierno, por la ley de 17 de Junio de 1864, para vender las de azufre, como pertenecientes á las fábricas de esta materia: por consiguiente, su enajenacion habrá de acomodarse á las reglas espuestas en la seccion anterior.

Tambien fué autorizado, por el art. 8.º de la ley de presupuestos de 4 de Mayo de 1862, para la enajenacion de las minas de plomo de Falset, las cuales fueron subastadas en Febrero de 1868. Estas minas nada producian

al Estado hacía muchos años, porque el agua dificultaba su esplotacion, causando un gasto de custodia y conservacion realmente improductivo, lo cual motivó su venta.

Son igualmente improductivas desde 1857 las de lápiz-plomo de Marbella, por cuya razon en 1868 se preparó el espediente á fin de obtener la autorizacion necesaria para enajenarlas, sin que se haya realizado hasta el dia.

Las de sal están comprendidas en las disposiciones sobre salinas, que luego espondremos en esta misma seccion.

Las de hierro y de carbon, como destinadas al servicio de las fábricas nacionales de armas y municiones, parece que no deberán enajenarse mientras se conserven estas fábricas, ó sean necesarias para las mismas.

Restan, pues, las de azogue de Almaden, las de cobre de Riotinto y las de plomo de Linares, que son las únicas que tienen importancia por su riqueza y por los ingresos que dan al Tesoro público (1). No es de este lugar el exámen de la cuestion económica sobre si conviene ó no al Estado la enajenacion de tales minas: basta consignar que solo se ha pensado en ella en épocas de grandes apuros para el Tesoro, y como medio de procurarse recursos. Con este objeto sin duda ha sido autorizado el Gobierno para la venta de las de Riotinto, por la ley de 25 de Junio del corriente año 1870, no habiéndose adoptado igual medida hasta ahora respecto de las de Almaden y Almadanejos y las de Linares.

La autorizacion concedida al Gobierno por dicha ley ha sido para vender á perpetuidad no sólo el derecho esclusivo de esplotar y beneficiar las espresadas minas de cobre de Riotinto; sino tambien las máquinas, aparatos, caballerías, herramientas, oficinas, talleres y demás edificios destinados á las diferentes faenas de esplotacion y beneficio de minerales, y á la habitacion de empleados y operarios; en una palabra, todo lo que pertenezca al Estado en el suelo y subsuelo dentro del perímetro que se demarque á dichas minas, con inclusion de la parte de montes y terrenos que se conceptúe necesaria para las operaciones de esplotacion y beneficio. Todo esto ha de sacarse á la venta en conjunto, tasándolo préviamente en la forma que determina la ley citada de 25 de Junio de 1870, y bajo las condiciones especiales que en la misma se espresan, siendo las principales, que deben mediar seis meses entre el anuncio y el acto de la subasta, y que el precio del remate ha de pagarse en metálico, en diez plazos y nueve años, llevando aparejada ejecucion los pagarés que entregue el comprador, con hipoteca especial de la finca enajenada. Véase, por tanto, dicha ley en la seccion 5.ª de la *parte legislativa*. Es regular, que además de dicha hipoteca se exija una fianza proporcionada al valor de los artefactos y demás moviliario, como se previno respecto de las fábricas de salitre, azufre y pólvora. Esto será objeto del pliego de condiciones económicas, que ha de formar la Direccion de propiedades y derechos del Estado, y que no se ha publicado todavía.

Los montes y terrenos agregados hasta ahora á dichas minas, que no se comprendan en la venta de las mismas, por no conceptuarlos necesarios para las operaciones de su esplotacion y beneficio, se someterán á la ley general de desamortizacion, como se previene en el art. 3.º de la citada ley, y se venderán por lo tanto como las demás fincas de bienes nacionales.

En cuanto á salinas, todas han estado esceptuadas de la venta, hasta que por la ley de 16 de Junio de 1869 se declararon completamente libres, desde 1.º de Enero de 1870, la fabricacion y venta de la sal, des-

(1) Los productos de estas minas en el año económico de 1866-67 fueron los siguientes: de las de Almaden, 18.620,948 rs.; de las de Riotinto, 5.769,118; y de las de Linares, 3.515,638: total, 27.905,704 rs. En el presupuesto para el año económico de 1868-69, se calcularon dichos productos, en 26.345,930 rs. los de Almaden; 8.220,000 los de Riotinto, y 4.479,600 los de Linares; que hacen al todo 39,045,530 rs.: rebajados los gastos de personal y material para la esplotacion, calculados en 7.336,950 rs. para las primeras; 6.709,440 para las segundas, y 2.412,660 para las últimas; al todo 16.459,050 rs., restan 22,586,480 rs., en que se calculó el producto líquido de dichas tres minas para el espresado año. Ultimamente las de Linares han sido arrendadas por millon y medio de reales al año, líquidos para el Tesoro.

apareciendo por consiguiente el estanco y el monopolio, ejercido hasta ahora por el Estado. En su consecuencia, por el art. 3.° de dicha ley se declararon en estado de venta todas las salinas de la Hacienda, y las demás fincas y efectos pertenecientes á las mismas, que se hallasen aplicados esclusivamente al servicio de la renta, con la sola escepcion de las de Torrevieja, Imon y los Alfaques. Pero esta escepcion ha quedado limitada á las de Torrevieja, que son las más importantes por su calidad, riqueza y fácil esplotacion; pues por el art. 4.° de la ley de presupuestos de ingresos de 8 de Junio de 1870, ha sido autorizado el ministro de Hacienda para enajenar tambien las salinas de los Alfaques y de Imon.

Todas estas ventas han de hacerse en pública subasta, y á condicion de pagarse en metálico el precio del remate en nueve años y diez plazos iguales. Hasta ahora no se han publicado las demás condiciones especiales á que deberán subordinarse, ni se ha anunciado la subasta para la venta de ninguna salina.

SECCION XIV.

DE LA VENTA DE LOS PEQUEÑOS TERRENOS Ó PARCELAS, QUE POR SÍ SOLOS NO FORMAN SOLARES EDIFICABLES.

Entre los bienes nacionales, especialmente de los procedentes de manos muertas eclesiásticas, existian en algunas poblaciones pequeñas porciones de terreno, que por sí solas no llegaban á formar solares de los ordinarios, conforme á los planos aprobados para la edificacion de casas en la localidad respectiva. Esto dificultaba la enajenacion de tales terrenos, si habia de sujetarse á las condiciones generales. Lo propio sucedia con los terrenos sobrantes de los espropiados para alguna obra pública, en el área de algunas fortificaciones cedidas á la Hacienda, y con los de caminos y carreteras abandonadas. Para facilitar la venta de todos estos terrenos, era necesario adoptar disposiciones especiales, y con este objeto se dictó la ley de 17 de Junio de 1864.

Teniendo en consideracion la conveniencia pública y privada de que esas *parcelas* se agreguen á las casas ó terrenos contíguos, se dispuso que se adjudiquen por el precio de su tasacion, y á pagar al contado, á los propietarios colindantes, que lo soliciten, siempre que sean de menores dimensiones que los terrenos que estos posean; y aun tambien siendo de mayores dimensiones, cuando á juicio del Gobierno, y segun las circunstancias, convenga verificar la enajenacion en esa forma. Sólo en el caso de que los propietarios colindantes no soliciten la adquisicion de dichos terrenos, podrán venderse en público remate con sujecion á las reglas establecidas para las demás fincas de bienes nacionales; pero concediendo á aquellos el derecho de tanteo, del que podrán hacer uso dentro de los nueve dias siguientes al de la subasta, para que se les adjudique por el mismo precio y condiciones, siempre que el mejor postor no fuese tambien propietario colindante.

Cuando dos ó más propietarios colindantes soliciten la adjudicacion de alguna de dichas parcelas, se dividirá entre ellos, ó se adjudicará á uno solo, segun las circunstancias de cada caso, á juicio del Gobierno.

En cuanto á los terrenos espropiados conforme á la ley de espropiacion forzosa por causa de utilidad pública, se reservó á los primitivos dueños el derecho de reversion, reintegrando el precio de espropiacion y el importe de las mejoras útiles y necesarias si las hubiere, siempre que por sí mismos, ó sus herederos, siguiesen poseyendo el terreno colindante, y no hubiesen trascurrido quince años desde la espropiacion. En otro caso se sujetarán á las reglas antes indicadas.

En la Real instruccion de 20 de Marzo de 1865, dada para el cumplimiento de la ley antes citada, se dictaron reglas para la instruccion de los espedientes que se incoen en solicitud de dichos terrenos, y para la tasacion y adjudicacion de los mismos, como tambien para su venta, cuando no haya sido solicitada la adjudicacion, ó los propietarios colindantes no se conformen con la tasacion practicada por los peritos. En dichas reglas

están previstos todos los casos, se determinan las autoridades y demás funcionarios que deben intervenir en la instruccion y resolucion de estos espedientes, y son tan circunstanciadas, que en su esposicion no hariamos más que repetir lo que dice la misma Real instruccion. Véase esta, por tanto, en la seccion 6.ª de la *parte legislativa*.

Sólo haremos notar que los acuerdos de la Junta superior de ventas, á cuya resolucion se someten todos estos espedientes, causan estado, si no se reclaman en el término de un mes para ante el Ministro de Hacienda; á diferencia de los demás casos de resoluciones análogas sobre bienes nacionales, en los cuales se concede el término de 60 dias para entablar dicha reclamacion, como se espuso en el §. 8.º de la seccion IX. Contra la resolucion del Ministro procederá la vía contenciosa, dentro del término y en la forma que se indicó en dicho lugar.

Tambien es de notar, que el *derecho de tanteo* no debe utilizarse judicialmente, como en los demás casos, en que procede; sino por la vía gubernativa, acudiendo al jefe económico de la provincia, el cual instruye el espediente, con audiencia del rematante, y lo remite á la resolucion de la Junta superior de ventas, segun se dijo ya en la seccion VII.

SECCION XV.

DE LA VENTA DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO DE LA CORONA.

En el §. 5.º de la seccion 1.ª se espuso ya lo que se halla dispuesto respecto á la venta de los bienes del patrimonio de la Corona y de la Real Casa, con espresion de los que han sido esceptuados de esta medida. Réstanos esponer solamente la forma en que ha de procederse á dicha venta.

Como se indicó en el lugar citado, por la ley de 12 de Mayo de 1865, despues de designar circunstanciadamente los bienes que habian de formar en lo sucesivo dicho patrimonio, y la forma en que habian de conservarse y disfrutarse, se declararon en estado de venta los prédios rústicos y urbanos, los censos y cualesquiera otros bienes que hubieren pertenecido al propio Real patrimonio, y no estuviesen comprendidos en los que se reservaron al mismo por dicha ley. Y para llevar é efecto estas ventas, cuya ejecucion se encargó á la propia administracion de la Real Casa, con una junta creada por dicha ley, compuesta de alto funcionarios y de senadores y diputados elegidos por los cuerpos respectivos, en el reglamento de 20 de Junio del mismo año 1865 se dictaron las reglas convenientes, en armonía con las que rijen para la venta de los bienes nacionales. En ellas se determinó todo lo que habia de practicarse para la tasacion y capitalizacion de las fincas y censos, subastas, adjudicacion, fianza de arbolado en su caso, pago del precio, que debia verificarse en diez plazos y nueve años, posesion y otorgamiento de escritura, como tambien en los casos de quiebra por falta de pago; todo en términos claros y precisos. Véase, por tanto, dicho reglamento en la seccion 7.ª de la *parte legislativa*.

Pero todas estas disposiciones quedaron sin efecto en virtud de la ley de las Córtes constituyentes de 18 de Diciembre de 1869, que declaró estinguido el patrimonio de la Corona, fundado por la ántes citada de 12 de Mayo de 1865, mandando se incorporasen al Estado y se enajenaran todos los bienes del mismo, y los detentados que se reivindicaran en adelante, con la sola escepcion de los destinados al uso y servicio del Rey, de los que deban conservarse por su carácter histórico ó artístico, de los que convenga destinar para servicio del Estado, y de los que, con arreglo á la ley de 9 de Junio del mismo año 1869, se cedan para las servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos enclavados en los territorios que fueron de la Corona.

Por la propia ley de 18 de Diciembre se encargó al Ministerio de Hacienda todo lo relativo á la venta de los bienes raices, y á la redencion y venta, en su caso, de los censos, no sólo de los que formaban últimamente el patrimonio de la Corona; sino tambien de los que habian sido segregados de él en virtud de la ley de 1865, y todavía estaban

sin enajenar. Se comprendieron en los censos los arrendamientos anteriores al año de 1800, conforme al art. 2.° de la ley de 27 de Febrero de 1856. Y se mandó además, que tanto la enajenacion de las fincas, como la de los censos en su caso, y la capitalizacion de estos, se llevaran á cabo con arreglo á la legislacion general vigente sobre venta de bienes nacionales; si bien pagándose el precio en el número de años y plazos establecidos, y segun el método prescrito para la enajenacion de los bienes de corporaciones civiles; esto es, en metálico y en diez plazos y nueve años, como se dijo en la seccion V. De consiguiente, es aplicable en el dia á los bienes de que tratamos todo lo espuesto en las secciones II á X del presente artículo. Sin embargo, «los incidentes y reclamaciones que produzcan las ventas y los censos redimidos, en virtud de lo dispuesto en la citada ley de 12 de Mayo de 1863 y reglamento dictado para su ejecucion, se tramitarán y resolverán con arreglo á la misma ley y reglamento,» segun se previno en el art. 12 de la de 18 de Diciembre de 1869.

Y no sólo los bienes del patrimonio de la Corona, sino tambien los de los patronatos de la misma, se mandaron enajenar por dicha ley, con arreglo á las leyes generales de desamortizacion, disponiéndose á la vez, que «las cargas de hospitalidad, beneficencia y otras, que pesan sobre los patronatos, se capitalizarán debidamente; y para su continuacion y cumplimiento, sin perjuicio de ser revisadas, se espedirán inscripciones nominativas intransferibles del 3 por 100 interior, cuyos intereses formarán la renta que ha de cubrir aquellas obligaciones.»

SECCION XVI.

DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES EN ULTRAMAR.

Por las circunstancias especiales de nuestras provincias ultramarinas no se ha podido, ni hubiera sido conveniente, hacer estensiva á las mismas la desamortizacion general, civil y eclesiástica, decretada para la Península. Sin embargo, en 1841 fueron suprimidas las órdenes religiosas de la isla de Cuba por disposicion de aquellas autoridades, secundando las ideas que entonces dominaban en el Gobierno de la metrópoli. Este aprobó tácitamente la medida, incautándose de los bienes y ordenando su enajenacion para atender con sus productos á las atenciones del Tesoro público.

Posteriormente, por Real cédula de 26 de Noviembre de 1852, aceptando como válidos aquellos hechos, se dispuso, entre otras cosas, la enajenacion á censo de las fincas rústicas y urbanas de dichas órdenes religiosas, destinando sus productos á la manutencion y sostenimiento de los institutos piadosos, consagrados especialmente á la educacion moral y religiosa de las clases pobres y gente de color, que fué preciso crear para llenar en lo posible el vacío que habia quedado con la supresion de los regulares, ó cuyo cargo habian estado dichos institutos, y disponiendo lo conveniente para la administracion de tales bienes.

El medio indicado de enajenacion no dió el resultado que se deseaba, ni los productos de los bienes bastaban para cubrir las atenciones á que fueron destinados (1). Se creyó, por tanto, conveniente modificar dicha Real cédula, adoptando otro sistema, cual fué el de enajenar el Estado en pleno dominio los bienes, considerándolos como nacionales, y que cargara el tesoro de la isla de Cuba con la obligacion de satisfacer las atenciones de instruccion pública y de beneficencia, á que estaban destinados los productos de aquellos, incluyéndolas en el presupuesto general de gastos de la isla, como las demás atenciones de la misma. Así quedaba asegurado el cumplimiento de estas cargas, y se realizaba la completa desamortizacion de tales bienes, pro-

(1) En la esposicion que precede al Real decreto de 18 de Julio de 1862, de que luego se hará mérito, se consignó que el valor capital de los bienes del clero regular de la isla de Cuba, de que se incautó el Estado, importaba 6.700,000 pesos fuertes, y los gastos de los referidos institutos ascendian próximamente á 250,000 anuales, escediendo estos gastos en 30,000 pesos fuertes al producto de dichos bienes.

metiéndose el Gobierno que esta reforma contribuiria al fomento de la riqueza y produccion de dicha isla, y al mejor órden y regularidad de su administracion económica.

Para llevarlo á efecto se dictó el Real decreto de 18 de Julio de 1862. Por su art. 1.° se declararon en estado de venta, sin perjuicio de las cargas y servidumbres, á que legítimamente estuviesen sujetos, todos los prédios rústicos y urbanos, solares y censos, que pertenecieron á las suprimidas órdenes religiosas de la isla de Cuba; esceptuándose de la venta por el art. 2.°, los templos destinados al culto; los edificios destinados, ó que el Gobierno destinare al servicio público, y cualquier otro edificio ó finca, cuya venta no crea el Gobierno oportuna por razones graves.

En los artículos subsiguientes se dan reglas para la tasacion y venta de dichos bienes, análogas á las que rigen en la Península, bajo las bases, de publicidad de las tasaciones y de la subastas por medio de la *Gaceta de la Habana* y demás periódicos: doble subasta simultánea en la capital de la isla y en la del distrito judicial ante los jueces respectivos, con asistencia del promotor fiscal: aprobacion del remate y adjudicacion de la finca por la Superintendencia, prévio informe de la junta de ventas y de la Intendencia general: pago del precio en metálico, en diez plazos y nueve años, con hipoteca especial de la finca, y bonificacion del 8 por 100 por los plazos que se anticipen; y exencion en estas ventas de los derechos de alcabala, hipotecas y de cualquier otro impuesto análogo. Véase, en la seccion 8.ª de la *parte legislativa*, el citado Real decreto, en el que se esponen con claridad las reglas ó bases indicadas.

En cuanto á *solares*, se dispuso, que los que estuviesen arrendados, si los arrendatarios hubieren edificado en ellos, podrán adquirirlos por el precio de la tasacion, que sirvió de base á los arrendamientos; y si no hubieren edificado, se venderán en pública subasta como los demás bienes. Los solares no arrendados, pero sí ocupados por edificios con título legítimo, podrán concederse tambien por el precio de su tasacion á los dueños de los edificios.

Y respecto de *censos*, se declararon como tales los arrendamientos anteriores al año 1800, que no escedien lo de 1,100 reales de plata fuerte en su orígen ó en el último año, hayan subsistido desde aquella fecha en una misma familia; y lo propio, aunque el arrendamiento total esceda de los 1,100 reales de plata, si estando la finca dividida entre dos ó más particulares, no paga cada uno de ellos suma mayor que la espresada. Lo mismo, que por la ley de 27 de Febrero de 1856 se dispuso para la Península.

Por el art. 25 del antedicho real decreto se ordenó que la Superintendencia procediese á formular, oyendo á la Intendencia y al Consejo de Administracion, y sometiera á la aprobacion del Gobierno, el reglamento especial que, á tenor de las bases que quedan indicadas, habia de observarse para la tasacion y capitalizacion de los bienes por la renta, para la enajenacion de los censos, para asegurar la realidad de la concurrencia en las subastas, y la responsabilidad de los compradores, teniendo presente para este fin, y en la parte que le sea aplicable, la ley de 16 de Enero de 1856, el real decreto de 19 de Febrero siguiente, la ley de 1.° de Mayo de 1855, y los reglamentos para la ejecucion de estas disposiciones. Tal reglamento no ha sido publicado hasta ahora en la *Gaceta de Madrid*, ni en la *Coleccion legislativa*, no obstante que por Real órden de 5 de Agosto de 1863 se recordó su formacion al Superintendente delegado de Hacienda de Cuba, ordenándole, en vista del tiempo trascurrido desde que se espidió el citado real decreto, que informara si se habia suprimido ya la administracion de bienes de regulares, resumiendo sus funciones la de rentas terrestres, y qué motivos habian retardado el dar cuenta de la ejecucion de estas disposiciones, así como de la instruccion mandada formar para la venta de los espresados bienes.

Esto revela que ofrecia dificultades la ejecucion de tal medida, y sigue ofreciéndolas, como se indica en las esposiciones que preceden á los presupuestos de dicha isla de 1866 á 1868, en las cuales se consigna que no habia llegado á efectuarse la venta de bienes de

regulares por causas generales, ajenas á la intervencion del Gobierno. Al mismo propósito, en Real órden de 27 de Mayo de 1866, haciendo observaciones al Gobernador superior civil de Cuba acerca del resultado que ofrecian los presupuestos, se le dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «Comprenderá tambien V. E. que despues del tiempo trascurrido urge y es conveniente dar una solucion práctica á la venta de los terrenos de las murallas y de los bienes de regulares. Tasados como lo están esos bienes, deben hacerse todo género de esfuerzos para que los señalamientos por ambos conceptos en el presupuesto de ingresos no sean imaginarios; pues si de importancia para el Tesoro es realizar los valores de esos terrenos, tambien lo es respecto á las propiedades que fueron de regulares, por los gastos tan crecidos que impone su administracion.» A pesar de estas prevenciones, las cosas siguen hoy en el mismo estado, debido sin duda á la situacion anormal en que se encuentra aquella isla por la insurreccion de 1868.

Por real órden de 5 de Agosto de 1863 se declaró, «que el ramo de temporalidades de los jesuitas de dicha isla de Cuba debe considerarse como parte integrante del de bienes de regulares, á cuya contabilidad deberá incorporarse, siguiendo una misma suerte en su administracion, *enajenacion* y demás consecuencias del Real decreto de 18 de Julio de 1862,» que es el que hemos expuesto anteriormente.

Además de los bienes de regulares, de que se ha hecho mérito, existen en la isla de Cuba otros muchos inmuebles pertenecientes al Estado, como los terrenos de las murallas de la Habana, los bienes vacantes y mostrencos, que se rigen por la ley de 16 de Mayo de 1835, los que se adjudican á la Hacienda en pago de deudas, y otros de que se hará mencion en sus artículos respectivos, como asimismo los edificios destinados al servicio público, que por esta razon no deben enajenarse. Lo propio sucede en Puerto-Rico y Filipinas. Para la venta de aquellos bienes, cuando conviene al Estado su enajenacion, no hay establecidas reglas especiales: deben subordinarse, por tanto, á las generales dictadas para la venta de cosas pertenecientes a la Hacienda pública en el tít. 25, libro 8.° de la Recopilacion de Indias, que trata *de las almonedas*, y demás disposiciones vigentes sobre el particular. Segun ellas, tales ventas han de hacerse en pública subasta, prévia tasacion de los bienes, y con las condiciones que estime la Junta superior directiva de Hacienda, é intervencion de la de almonedas, correspondiendo al Intendente general la aprobacion de todos los actos de estos espedientes, si bien con subordinacion al Gobernador superintendente, como se declaró por Real órden de 6 de Setiembre de 1856.

Sin embargo, para la *enajenacion de algunas fincas del Estado, existentes en la isla de Puerto-Rico*, se dictaron reglas especiales por Real órden de 24 de Enero de 1857. La motivó una consulta del Gobernador superintendente de dicha isla, proponiendo la enajenacion de varias fincas y las reglas que al efecto debieran observarse. Se consultó sobre ello á la seccion de Ultramar del Consejo Real, y S. M. se conformó con esta consulta, que se insertó en dicha Real órden. Se trataba de dos clases de bienes, pertenecientes al Estado; unos por estar dentro de la zona militar, y otros por haber pertenecido á regulares (1). Para la enajenacion de unos y otros se dictaron las reglas siguientes:

Respecto de los bienes comprendidos en la zona militar, se acordó que se vendieran en pública subasta ante la junta de almonedas, subdividiendo esta los terrenos como mejor le pareciera, haciéndose el pago en 20 años de plazo, la quinta parte al contado, admitiéndose en pago por su totalidad los créditos procedentes de depósitos, préstamos con in-

(1) Segun resulta de la indicada consulta, los bienes comprendidos en la zona militar, cuya venta se acordó, eran 138 solares, destinados á casas de habitacion y huertas, cuyo valor en renta ascendia á 58,714 pesos 187 céntimos, y en renta á la de 2,220 con 195 céntimos; y los de regulares eran, 120 ½ solares, cuyo valor en venta ascendia á 18,075 pesos, y en renta á 903 con 75 céntimos, y diversas fincas destinadas á la agricultura, cuyo valor en venta era de 137,320 pesos, y su renta 5,286 con 50 céntimos.

terés ó sin él, atrasos de sueldos y demás obligaciones de aquellas cajas, siempre que sean posteriores á la ley de presupuestos de Mayo de 1835, y que los poseedores actuales ó sus causantes sean los legítimos acreedores.

Y *en cuanto á los bienes de regulares*, se dispuso que se procediera á su venta en los propios términos antedichos; pero á dinero metálico, puesto que la admision de papel en pago de los mismos estaba prohibida espresamente por la ley de 30 de Enero de 1838, que tuvo por objeto la organizacion de una junta en Puerto-Rico y en Cuba, para realizar el subsidio estraordinario de guerra y la enajenacion de bienes de regulares, cuya ley dice en su art. 8.°, despues de ocuparse de la manera de enajenar dichos bienes, «entendiéndose siempre que la venta será por dinero, sin admitir especie alguna de papel.» Y á la vez se autorizó al Gobernador superintendente, para que enajenase á censo enfitéutico las fincas de dicha procedencia, que no pudieran venderse á dinero.

Además, se dispuso respecto de unos y otros bienes que, ya se vendieran á dinero y á plazos, ó ya se trasmitieran por el contrato enfitéutico, si estaban dotados de árboles, así el comprador como el censuario prestasen caucion y fianza de no permitir la tala hasta que hubieran satisfecho el último plazo.

Téngase presente, que en todo caso es de la competencia de la Hacienda la venta de terrenos pertenecientes al Estado, y sus incidencias, aun cuando tales terrenos estén bajo la jurisdiccion de las autoridades de guerra y de marina por hallarse comprendidos en la zona militar ó marítima. Así se declaró por Real órden espedida por el Ministerio de Marina en 10 de Enero de 1855, y comunicada en 28 de Febrero siguiente por el de Estado y Ultramar á los Superintendentes de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas (1).

Réstanos indicar los recursos que proceden en los espedientes de ventas de bienes nacionales de Ultramar y sus incidencias, y las autoridades competentes para decidirlos. El Gobernador superior de la isla resuelve definitivamente en la via gubernativa. Contra sus acuerdos procede el recurso contencioso-administrativo, en los mismos casos en que puede entablarse contra los del Ministerio de Hacienda en los asuntos de ventas de la Península. De este recurso conocia antes la seccion de lo contencioso del Consejo de Administracion de la isla respectiva, con apelacion al Consejo de Estado (1); y hoy la Sala primera de la repectiva Audiencia (2) con apelacion á la Sala cuarta del Tribunal Supremo (3). Ha de entablarse la demanda dentro del término de 90 dias en las provincias de América, y de 120 en Filipinas, á contar desde la notificacion administrativa de la resolucion objeto del recurso; y si el interesado se hallare en la Península, dentro de seis

(1) Esta Real órden dice así: «Enterada la Reina (q. D. g.) del espediente instruido en este Ministerio (el de Marina) con motivo de la carta de V. E. (del Comandante general del apostadero de la Habana) fecha 4 de Noviembre de 1852, relativo al remate intentado realizar por el juez de Hacienda de ese punto, de unos terrenos á orillas del mar, situados en la ensenada de Guanabacoa, dentro de los límites de la jurisdiccion de Marina; se ha dignado resolver, despues de haber oido el parecer de la Junta consultiva de la Armada, manifieste á V. E., como de su Real órden lo verifico, que cuando hayan de realizarse ventas de terrenos de la naturaleza del que se trata, debe ser de la esclusiva competencia de la autoridad de Hacienda el ejecutarlo de la manera que estime mas conveniente á los intereses públicos; pero siempre á condicion de que los usos, á que dichos terrenos puedan destinarse por los compradores, en nada puedan perjudicar á la pesca, á la navegacion y demás correspondiente á la marina, cuyos intereses están en el deber de protejer las autoridades del ramo, por lo cual antes de procederse por la Hacienda á la enajenacion de terrenos en las costas ó en las playas, será muy conveniente consulten á las de Marina, por si de ello podrá irrogarse perjuicio alguno al servicio y usos de la misma.»

(1) Art. 27, núm. 7 del Real decreto de 4 de Julio de 1861, organizando los Consejos de Administracion de Ultramar, que dice así: «La Seccion de lo contencioso constituida en tribunal conocerá.....: 7.° Sobre el cumplimiento, inteligencia, rescision, efectos ó incidencias de los arrendamientos, *ventas* y mercedes de los bienes del Estado, cuando en estos dos últimos casos se trate del acto primitivo de adquisicion, y salvo el pleito de propiedad.»

(2) Decreto del Poder ejecutivo de 6 de Abril de 1869.

(3) Art. 8.° de id. y 282 de la ley provis. sobre organizacion del poder judicial de 15 de Setiembre de 1870.

meses y de un año respectivamente. Para interponer la apelacion, en los casos en que procede, hay el término de 10 dias (1).

Las *incidencias* de estas ventas, en cuanto á su calificacion y á su fondo, se rigen por las mismas reglas y jurisprudencia que las de la Península: véase, por tanto, la seccion IX.

COMPROBACION, COMPROBAR. Probar ó corroborar una cosa con otra. Del latin *comprobatio*, y esta voz del verbo *comprobare*: en rigor etimológico, probar juntamente; lo cual no es del todo exacto, ni puede aceptarse sin esplicacion, como diremos. Cierto que cuando en el órden probatorio se compara ó confronta uno de los medios aducidos de prueba, que aparece más ó ménos ineficáz en sí, con otro eficáz, una copia por simple *concuerda*, por ejemplo, con un protocolo ó matriz, y cuando en virtud de esta confrontacion resulta eficáz tambien uno y otro medio, el comprobado y el comprobante *prueban juntamente*, ó juntamente sirven para la comprobacion. Pero no siempre de la operacion de comprobar, y mas bien confrontar, resulta acreditada la certeza y eficacia probatoria del documento ó hecho confrontado; y entonces no hay verdad, ni exactitud en la etimología. Y es que las voces comprobacion y comprobar tienen una acepcion activa y otra pasiva: espresa la primera la operacion ó trámite de comparar, ó confrontar el medio ineficáz ó ménos eficáz, con el eficáz ó comprobante; la segunda, la certeza y eficacia, que por este medio se buscaba. Así la Academia, dice con exactitud que *comprobacion* es «accion y efecto de comprobar:» siendo la primera la comparacion ó cotejo que se hace; la segunda, la certeza adquirida de la verdad de un suceso, y ya en el órden judicial, habria de decirse, de un medio probatorio.

Desde luego se comprende que la verdad, que resulta de la comprobacion, puede constituir plena prueba; y meramente prueba parcial, segun sea la calidad del documento, hecho, ó dicho comprobado. Sucederá lo primero, sí, por ejemplo, una escritura, por simple concuerda, se confronta con su protocolo, y resulta conforme: lo segundo, si en una prueba *adminiculativa* se confrontan sus pormenores, ó medios parciales, y solo algunos de ellos quedan acreditados y eficaces.

En lo judicial el caso mas frecuente de comprobacion es el cotejo de escrituras ó documentos de la fé pública; pero siendo tan variados y numerosos los medios de prueba, que pueden emplearse, en la misma proporcion es vária y estensa la materia de comprobacion: y puede darse igualmente respecto de piezas ó documentos de administracion: de cualquier género de oficinas del Estado, provinciales ó municipales: de archivos del Estado ó de particulares: libros y asientos de una casa de comercio; libros talonarios, un cobratorio, una tazmia, un códice; cualquier documento, en fin, de aquellos, á que estiende sus efectos el trato social.

En sentido mas lato, aun los medios orales de prueba admiten comprobacion; aunque mas bien entonces se dice corroboracion. El careo, á su vez, es realmente una comprobacion, cuando responde á los fines del tribunal.

En todo caso ha de tenerse presente que para la eficacia judicial probatoria, ya haya de ser por cotejo, ya por compulsa, ya por careo etc. para efectos judiciales, la diligencia de comprobacion ha de realizarse por mandato judicial y con citacion de parte.

La comprobacion y corroboracion pueden tener lugar aun respecto de una compulsa presentada en prueba. Véase **COMPULSA, COTEJO.**

COMPROMISARIO. El que se encarga de desempeñar un compromiso, segun espresan los artículos subsiguientes y otros del caso.

COMPROMISO (EN GENERAL). Del latin *compromissum*, y esta voz del verbo *compromitto*; en rigor etimológico prometer juntamente, y por tanto dos ó más entre sí: en el foro, encomendar dos ó más que contienden, ó fuera de juicio disputan sobre derecho ó intereses opuestos, la solucion de sus cuestiones, ó diferencias, á la resolucion

(1) Arts. 1.° y 60 del reglamento de 4 de Julio de 1861.

de un tercero, obligándose á estar y pasar por lo que decida, y en eso está el *compromiso*, ó la promesa mútua. La persona ó personas, que admiten el compromiso ó se encargan de él, se llaman *compromisarios*, y tambien *árbitros* y *arbitradores*, segun el caso, como esplanamos en sus artículos.

Desde luego se vé, que por este medio, aun las cuestiones contenciosas, se sustraen á los tribunales de justicia. Por eso ha sido necesario que las leyes, como los cánones, en su caso, autoricen á los particulares para esta sustitucion y delegacion de funciones; y desde tiempos antiguos así lo vienen disponiendo todos los derechos y todas las legislaciones: justa consideracion del legislador, que, conociendo todo lo amargo y dispendioso de los litigios, ha autorizado siempre y multiplicado los medios de atenuarlos, y á ello hay que considerar encaminados los juicios de paz, de conciliacion ó avenencia, la sumision voluntaria de cada uno á tribunal de su confianza, la recusacion, la transaccion con apartamiento, el compromiso, en fin, ya con la precision de ceñirse los compromisarios á reglas de derecho; ya solo á las de su prudencia, como esponemos en su lugar.

Pero los tribunales tienen leyes á que atenerse; mientras los compromisarios no siempre, como acabamos de indicar; y sin embargo, en el caso de haber de ceñirse á reglas de derecho, no hay costumbre de que la revocacion ó reforma de un *laudo*, lo sea con las costas; si bien podria haber responsabilidad por abuso trascendental.

Desde luego eso incumbe tomarlo en cuenta y prevenir lo conveniente á los comprometentes, y por ello, el compromiso mismo, esto es, la escritura, es la ley del caso. Por ello tambien es de necesidad que se consigne, y á las partes incumbe el dictar las condiciones, en escritura pública, como en lo civil, ya en escritura ó acto público, como ora está mandado, ora recibido, aun en lo canónico y político; que tal es la conveniencia del compromiso, que en todos los órdenes está autorizado.

Nunca se recomendará bastante la esplicitud en los términos del compromiso, adelantándose así á prevenir, que no sea ocioso y perjudicial por dilatorio, y de ahí la conveniencia de consignar el modo de dirimir una discordia posible, y de prefijar en lo contencioso una pena para el compromitente, que no se conforme con el *laudo*.

Hemos indicado, que en efecto, el compromiso puede tener lugar en el órden civil, en el canónico y en el político. Véanse los artículos subsiguientes.

No sólo está autorizado y consentido el compromiso en contienda ó diferencias sobre derecho; sino tambien en dificultades de ejecucion de funciones ó atribuciones, como en la eleccion de prelados, prebendados etc.

En cuanto al órden contencioso, no solo viene autorizado por el derecho comun, sino aun por la constitucion política. El tít. 5.° de la de 1812, en esta parte vigente aun como ley, dispone: «No se podrá privar á ningun español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.» (Art. 280.) «La sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes, al hacer el compromiso, no se hubieren reservado el derecho de apelar.» (Art. 281.)

Sobre todo lo dicho, véanse, además de los artículos subsiguientes, los de **ARBITRADOR, JUICIO ARBITRAL, JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.**

COMPROMISO (EN LO JUDICIAL). De la etimología y significacion de esta enunciativa hacemos mérito en el artículo que precede. En el de **ARBITRADOR, ARBITRO,** se trató ya estensamente de todo lo que se refiere al *compromiso*, con aplicacion á *lo judicial*, ó como medio de someter dos ó mas personas sus diferencias al juicio de árbitros ó arbitradores, esponiendo en la seccion VIII (página 411 del tomo 3.°) su carácter y naturaleza, formas de contraerlo, circunstancias que debe contener y efectos que produce. Posteriormente se publicó la ley de Enjuiciamiento civil, y al ordenar, en los títulos 15 y 16 de su 1.ª parte, el procedimiento para el *juicio arbitral* y el de *amigables componedores*, determinó tambien las personas que pueden contraer uno y otro compromiso, forma en que han de verificarlo bajo pena de nuli-

dad, y las cuestiones que no pueden comprometerse (arts. 770 á 775, y 819 á 823). Adoptadas las denominaciones antedichas por la ley vigente, bajo su enunciativa debemos tratar esta materia; y al verificarlo, indicaremos las modificaciones introducidas en la legislacion anterior, que se espuso en dicho artículo, sobre la forma y efectos del compromiso. Véanse, por tanto, además de los dos artículos antes citados, los de JUICIO ARBITRAL, y JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.

COMPROMISO (EN LO CANÓNICO). Una de las tres especies de eleccion para cargos eclesiásticos, practicadas en la iglesia. Su forma es la del compromiso en lo civil, esto es, el encargo unánime de dos ó mas que contienden, ó no pueden ponerse de acuerdo sobre derechos, funciones, ó atribuciones respectivas, dado, en debida forma; á una ó mas personas, para que en nombre comun, y en virtud del compromiso, resuelvan la dificultad. El orígen y aplicacion principal del compromiso en lo canónico, en dicho concepto, fué en la eleccion de obispos. Sabido es que en la primitiva Iglesia concurria á su eleccion el pueblo; y no hay que ponderar, en eleccion de tal carácter é importancia, las dificultades, inconveniencias, y hasta escesos de la muchedumbre. Para obviarlo todo, en lo posible, tuvo lugar el compromiso, ó eleccion de segundo grado: la muchedumbre delegaba en una, dos, ó mas personas, y estos compromisarios elegian obispos; como tambien luego, en casos de menos importancia y dificultad, al que debió obtener la prebenda ó el cargo eclesiástico de que se trataba ó se trata.

Cesó la práctica de compromiso para la eleccion de obispo; pero las reglas adoptadas por la iglesia para facilitar solucion en tales conflictos, han seguido en respeto, y en aplicacion, cuando se ha dado, ó se dá el caso en elecciones capitulares, ó análogas.

Apelábase al compromiso, no solo cuando habia motivos para temer que en la votacion directa no resultase elegido el más digno; sino tambien para elegir entre los que en ella no habian obtenido mayoría absoluta; y si solo relativa. (Conc. 4.° Lateranense, can. 24.) Las facultades de los compromisarios estaban ceñidas estrictamente á lo que autorizase el compromiso, que tambien debia ceñirse á términos canónicos (Decretales, cap. 32, título 6, lib. 1). Podian los compromisarios elegir candidato de entre sí mismos; pero no, si solo habia un compromisario, á sí propio.

El encargo de los compromisarios era revocable, mientras no hubieren empezado á desempeñarlo. Una vez ejercido, era irrevocable la eleccion, salvo que hubiese sido en sugeto indigno. Anulada en este caso la eleccion por el derecho, se devolvian las facultades íntegras á los comitentes; salvo á los que hubiesen tomado parte en la eleccion del indigno (cap. 30. Id.). Tambien recobraban sus facultades íntegras los comitentes para elegir por sí, ú otorgar otro compromiso, si el elegido no aceptaba (id. id.). Los compromisarios debian cumplir su cometido dentro del término canónico para nombrar obispo; pues pasado, cesaban en sus funciones, devolviéndose la facultad al superior inmediato. (Sexto, Decret., cap. 37, tít. 6, lib. 1.) No hay que decir que el patrono laical, para presentar, en virtud de concordato con la Santa Sede, como los reyes de España, no puede encomendar á otro su prerogativa. Véase ELECCION CANÓNICA. Sobre el compromiso canónico en lo contencioso, véase el artículo ARBITRADOR, ARBITRO.

COMPROMISO (EN LO POLITICO). Reconocida la conveniencia del compromiso, aconsejada, y aun impuesta á veces por la necesidad, no habria razon para que no se diese en el órden político; y eso en todas sus especies, desde el derecho público de un Estado, hasta el derecho de gentes.

Las naciones, en efecto, no tienen para sus contiendas un tribunal comun; ni todo ha de dirimirse por la guerra. Así, no es infrecuente, que sometan sus diferencias recíprocas al arbitrio de uno ó mas soberanos, que entónces no son, si bien en su alta esfera, otra cosa que compromisarios, ya árbitros, ya amigables componedores, de cuyo carácter participan tambien, en parte, los Congresos diplomáticos, como se vió en el célebre de

Viena, en el mas reciente de París, despues de la guerra de Crimea, y tantos otros.

Entre nosotros, se ha recurrido tambien á ese conveniente arbitrio, hasta en la grave cuestion de sucesion á la Corona, como se vió en el célebre y conocido *Compromiso de Caspe*, que reseñamos en el artículo **ARBITROS**.

A veces se ha aplicado tambien en el órden parlamentario en las llamadas elecciones de segundo grado, como sucedia por la Constitucion de 1839 y la ley electoral de su época. El cuerpo electoral elegia un cierto número de segundos electores, llamados *compromisarios*, y estos elegian asimismo irrevocablemente, salvo vicio de nulidad, á los senadores y diputados de cada diputacion parlamentaria.

Por la Constitucion y ley electoral de 1845 la eleccion indirecta fué sustituida por la directa: los diputados eran elegidos por el cuerpo electoral: los senadores por la Corona, y no ya para sola una diputacion, sino vitalicios.

En la actualidad (1870) por decreto del Gobierno provisional, establecido á consecuencia de la revolucion de 29 de Setiembre del año de 1868, todo se ha innovado. Por sufragio universal se ha elegido una sola Cámara constituyente, y, fuera de los términos, en la realidad de las cosas, se verifica en nuestro órden político el mas grave y solemne de los compromisos: los diputados constituyentes han venido con la mision y delegacion de fijar la forma de gobierno, que estimen mas conveniente para el país, y, de ser la monarquía, elegir monarca, como así se ha acordado; y tal es en cuanto á compromiso político el estado de las cosas al escribir este artículo.

COMPTOS. V. **CAMARA DE COMPTOS.**

COMPULSA. Copia, trasunto ó traslado, que por autoridad competente se manda sacar de un documento, que al efecto es, ó se reputa para el caso, matriz ó protocolo. Y en eso se diferencia del *cotejo*. Respecto de ella, el mandato es para sacar copia: en el cotejo, para confrontar la que ya existe, ora oficial, ora oficiosa, y puede cotejarse, aun una escritura original, redargüida de civil, ó naturalmente falsa.

Pero la voz compulsa es principalmente del tecnicismo forense. Dícese así, del latin *compulsum*, y esta voz, del verbo *compellere*, compeler, apremiar, obligar con fuerza de autoridad: y de la fuerza del mandato judicial ú oficial, como diremos, se llama aquella *compulsa*, esto es, copia sacada de mandato y con fuerza de autoridad.

Así, en el lenguaje técnico, toda copia no es compulsa; sino la que es sacada por mandato de autoridad competente; y de aquí la diferencia esencial y práctica en ellas: la copia simple, oficiosa, espontánea, para adquirir fuerza probatoria necesita de *cotejo*: la compulsa lleva el cotejo en sí, pues la copia se saca de mandato competente, de ordinario á peticion de parte, y siempre con citacion. Porque, en efecto, si la compulsa se ordena como medio de prueba, la parte habrá pedido en forma legal, se saque copia, se certifique de tal documento, se compulse, y entonces habrá por necesidad peticion, mandato y citacion, pues la parte puede asistir al acto.

Si se recurre á ella de oficio, y por tanto no como medio probatorio; sino para fines de justicia, como si el juzgado lo ordenase para mejor proveer, no mediarán sino mandato y citacion.

Venimos considerando la compulsa, en el órden judicial, que eso es técnico y al mismo tiempo lo mas comun; pero puede darse tambien, y se da en el órden administrativo en todas sus clases, pues en todas puede convenir traer copias, para esclarecimiento y acierto: y siempre habrá de mediar el mandato de la autoridad, y en su caso, el conocimiento de la parte, á la cual haya de perjudicar.

Habia un medio de evitar la compulsa, como en su caso el cotejo; trayendo á los autos, ó al espediente, el protocolo, matriz ú original, que siempre habria que comunicar á las partes; pero eso, en lo judicial, y en cuanto al protocolo de la fé pública, no solo está prohibido, sino ordenado que éste, traido al

juicio, no haria fé, ni por tanto constituiria prueba; salvo en lo contencioso-administrativo, en que la ley del Consejo de Estado permite mandar venir el protocolo á los autos, para cotejo y confrontacion. De la misma manera en lo administrativo, pueden hacerse venir los originales.

En consonancia con el efecto, el auto ó mandato, para compulsar, se dicen compulsivos; el despacho, suplicatorio ó provision para la compulsa, *compulsorios*. Despues de ello, si el registro, matriz ó archivo, no depende del juez, tribunal ó funcionarios de otro órden, que los espida, se necesita aun requerir á la autoridad ó autoridades de quienes dependa, ya por exhorto, ya por suplicatorio, por oficio rogatorio etc., segun el caso.

La compulsa se emplea tambien, ya por necesidad, ya á precaucion, aun respecto de autos y procesos, que han de elevarse por instancia ó por recurso al superior competente, como sucedia en Ultramar con los recursos de injusticia notoria, que venian á la Península. Sucede así especialmente, cuando hay riesgo de que sufran estravío, ó de otro modo se pierdan los autos ó piezas originales, con especialidad, si son voluminosos y si contienen documentos originales ó medios importantes de conviccion, que, perdidos, no podrian reproducirse, cuales serian el testimonio, reconocimiento ó posiciones definitivas de personas que hubieren fallecido.

De lo dicho se infiere, que la compulsa en particular, como la de todo el proceso, pueden pedirse por las partes, entendiéndose en todo caso, á costa de la que pide; y claro es que en autos ó procesos en que interviene, puede pedirlo el ministerio fiscal.

Como en el órden judicial es de tanta autoridad la copia ó trasunto espedido por el mismo escribano ó notario público, que autorizó el acto ó contrato, á que es referente el protocolo, no solo es conveniente, sino que está mandado, que viviendo el mismo, y no estando inhabilitado, él sea tambien el que autorice la copia. Si hubiese fallecido ó se hallase imposibilitado, lo verificará aquel á cuyo cargo se haya puesto el protocolo. (Ley del notariado de 28 de Mayo de 1862.)

Cuando el notario no es el originario, y el documento ha de llevarse á otra provincia; y en todo caso, cuando por la distancia ó por el tiempo sea conveniente, y tal vez necesario, asegurarse de la identidad del funcionario que espide la compulsa, deberá su firma venir legalizada en forma por otros dos notarios del mismo partido judicial. (Art. 30 de dicha ley.)

Todo español, á cuyo derecho convenga, puede pedir compulsa y asistir á la saca. Así está en la naturaleza de este derecho y trámite probatorio y en la jurisprudencia; y en el órden criminal, así lo establece terminantemente el art. 51 del reglamento provisional para la administracion de justicia.

Puede tambien ordenar de oficio la compulsa, así como el cotejo en su caso, para fines de su cargo, toda autoridad judicial, administrativa ó política. V. **COPIA**, **COTEJO**.

COMPULSION. El apremio y fuerza legal con que se obliga ó compele á alguno por medio de apercibimiento, conminaciones, multas y hasta prision, para que ejecute lo que debe y no quiere. El auto ó mandato, ordenándolo así, se dice compulsivo; la provision, despachos ú oficio de ejecucion de lo mandado, compulsorio.

COMPURGADORES. Los testigos de *creencia* en el medio de prueba, llamado, con especialidad en lo canónico, *purgacion*. Véase este artículo.

COMPUTACION. Del latin *computatio*: modo especial de determinar y contar los grados de parentesco, para efectos civiles y canómicos.

En sus artículos respectivos se espresa lo que en este punto es *tronco*, *líneas*, *generaciones*, *grado* y *parentesco*; y teniéndolo presente, diremos, que en la línea recta, ó sea la de ascendientes y descendientes, computan del mismo modo ambos derechos, admitiendo tantos grados, como personas, menos una, que es el tronco. Así, entre el padre, el hijo y el nieto, hay dos grados; y está en primer grado el hijo, en segundo el nieto, en tercero el biznieto, y así sucesiva y ordenadamente.

En la línea ascendente sucede respectivamente lo mismo: de cada uno á su padre,

hay un grado, dos hasta su abuelo, tres hasta su bisabuelo, y así indefinidamente subiendo: y lo mismo será invirtiendo el órden de arriba abajo, ó sea del bisabuelo al abuelo, del abuelo al padre y del padre al hijo.

En la línea trasversal, ó sea de hermanos y primos, no es así. En primer lugar, no se cuenta recorriendo una línea sola; pues entonces es la recta, ó la de descendientes ó ascendientes; sino comparando dos, derivadas ambas de un mismo orígen ó tronco, como los hermanos derivan del padre.

En esta línea, que se llama transversal, oblícua, de travieso, lateral y colateral, porque los indivíduos que la forman, habiendo de ser comparados y computados con los de otra, no nacen todos unos de otros sucesivamente, pues que el sobrino no nace del tio, ni el primo del primo, como en la recta el biznieto nace del nieto, el nieto del padre, el padre del abuelo etc. (ley 2, tít. 6, Partida 4), son diversas las computaciones civil y la canónica.

Esta cuenta las generaciones, tomando en conjunto dos, tres ó mas líneas, descendientes de un mismo tronco. Así dos hermanos, tres ó diez, todos constituyen una generacion, y están por tanto en primer grado canónico: en segundo, y por la propia razon, los primos carnales entre sí; en tercero, los primos segundos, y así sucesivamente. Puede suceder que las líneas sean desiguales; como si la una cuenta una sola generacion, y la otra, dos, tres ó más, cual sucederia buscando el grado entre un sobrino carnal, por ejemplo, y su tio. Entonces la enunciacion del grado es doble, comprendiendo los dos estremos de las líneas. En este caso, como el tio carnal está en primer grado, como su hermano, y el sobrino está en segundo, hay que decir, que el sobrino y el tio, están en primero con segundo grado. Así un sobrino segundo está con su tio, hermano de su padre, en tercero con primero: el sobrino tercero, en cuarto con primero ó primero con cuarto: un primo tercero con un segundo, en cuarto con segundo, y así sucesivamente.

En la computacion civil, por el contrario, se cuentan, no las generaciones, sino las personas de ambas líneas, empezando por la mas larga, si son desiguales, subiendo hasta el tronco comun y luego bajando. Por este método hay tantos grados como personas, menos el tronco. La frase usual en este punto, es que en la computacion civil *se sube y se baja*. Así, para determinar el grado civil entre dos hermanos, se sube del uno al padre, y se baja del padre al otro hermano, resultando dos grados como se vé, ó que están los hermanos en segundo grado; ó en otra forma, segun queda dicho, que hay tantos grados como personas, escluido el tronco. Al propio tiempo se ve que en la computacion civil no hay primer grado, pues cada hermano está en segundo respecto del otro.

El derecho canónico aplica la computacion para determinar los grados de parentesco que sirven de impedimento para el matrimonio, y algun otro efecto eclesiástico: el derecho civil, relativamente al matrimonio para las fundaciones familiares y disposiciones testamentarias, en que son llamados familias con espresion de grados: el derecho rentístico, para limitar los derechos de familia, favoreciendo los del fisco en sucesiones intestadas, impuesto de sucesiones y casos de mostrencos: el derecho administrativo, en fin, para poder obtar, ó no, á cargos municipales, y otros cargos ú oficios, ya en absoluto, ya en concurso de dos ó mas parientes.

Ultimamente, está mandado y es de práctica constante, que cuando la ley ó la institucion del hombre no ordene otra cosa, la computacion civil se aplique en asuntos civiles: la canónica, en asuntos eclesiásticos. (Leyes 3 y 4, tít. 6.°, Part. 6.°) Sobre los artículos mencionados, véase **CÓMPUTO.**

CÓMPUTO. Del latin *computus*: cuenta, cálculo, y se aplica á la cuenta ó cálculo de tiempo, ya para usos y fines científicos, ya civiles ó eclesiásticos. A veces significa lo mismo que *computacion*, y ambas voces vienen radicalmente del verbo *computare*; contar, calcular; pero hay entre ellas la diferencia, de que, cómputo, es más genérico y científico; computacion, mas práctica y concreta á fines de derecho. Así se vé, que se aplica con propiedad por uno y otro de-

recho á los grados de parentesco; mientras el cómputo se aplica de ordinario á solo los tiempos, si bien en un doble concepto: unas veces con universalidad científica, y entónces constituye lo que con más propiedad se llama *cronología*; y otras en sentido mas restricto y acomodado á la liturgia y prácticas del culto, denominándose cómputo eclesiástico. Algunas veces el cómputo se estiende á fines eclesiásticos y civiles, como sucede respecto de la Correccion gregoriana, que tratamos en otro lugar. En ambos conceptos el almanaque es el resultado práctico y usual del cómputo.

En lo eclesiástico, la base cardinal del almanaque es la Pascua de Resurreccion, y conocido el dia de la luna, en que cae, por él se determinan las restantes fiestas movibles y demás solemnidades de la Iglesia. Por eso, hasta ahora, el almanaque era anual: hoy se conoce, y todo lo facilita mas el *Almanaque perpétuo*, importante trabajo, debido al celo y criterio de los autores del *Arte de comprobar las fechas*. Sabido es, que Jesucristo celebró la última Cena en el dia de la Pascua de los judíos: y como esta se celebraba el dia 14 de la luna, de aquí, por necesidad, que la Resurreccion se verificó despues de dicho dia 14, y siempre hay que celebrarla así. En su consecuencia, teniendo presente en este punto la solemne declaracion del concilio de Nicea, el cielo lunar, y la Correccion gregoriana, la Pascua tiene que caer, desde el 22 de Marzo, al 25 de Abril, ambos inclusive. El almanaque perpétuo es, pues, el complejo de 35 almanaques ánuos, refiriendo en cada uno la Pascua á cada uno de los 35 dias mencionados, con todas sus consecuencias.

Se llama computista el oficial encargado en Roma de formar el almanaque. Véanse los multiplicados artículos conexos, como AÑO, ALMANAQUE, CRONOLOGÍA. Véase tambien la ley 14, tít. 1.°, lib. 1.° de la Novísima Recop., sobre la *Correccion gregoriana*.

COMUN. Del latin *commune*: cualidad ó requisito, que corresponde, á un mismo tiempo, á dos ó más cosas; dos ó más séres, porque siempre recae sobre pluralidad, y lo mismo se concreta á dos únicamente, que, en su caso, abarca á todas las de la creacion.

En el órden social, y como derivado ó en composicion, tiene aplicacion, no solo como cualidad, sino como derecho: derecho en la propiedad, como en los comuneros ó condueños; en la posesion y disfrute, como en la mancomunidad de pastos; en el usufructo dejado á dos ó más, y lo propio sucede en las cosas públicas.

Sustantivado, y tomando el efecto por la causa, se llama *comun* el conjunto de personas que disfrutan de la cualidad ó derechos de que se trata, como decimos, el *comun de vecinos*. El conjunto de todas las ventajas relativas á un todo corporativo, y muy señaladamente lo municipal, se llama *pro-comun*, esto es, utilidad ó provecho comun.

Aplícase la enunciacion, ya en sentido absoluto, ya relativo: así decimos *fuero comun*, derecho comun, por el que corresponde á la mayoría de españoles, por ejemplo; en contraposicion al fuero ó derecho especial de clases determinadas, como la milicia, el clero; al propio tiempo que estos fueros especiales son tambien comunes á todos los individuos de la clase respectiva.

Su aplicacion es á veces comparativa, y ya deprime, ya realza. Decir de un sugeto que es de una capacidad comun, es que no raya mas alto que la generalidad: atribuirle un talento no comun, es todo lo contrario. Sus abstractos *comunion*, *comunidad*, *comunismo* y otros análogos, tienen en el órden social importantes aplicaciones, como se vé en sus artículos. En el órden político y administrativo, por último, usada la voz en plural, *comunes*, expresa entre nosotros un grande hecho histórico y una importante innovacion en el derecho público y antigua constitucion de la monarquía. Véanse sus artículos.

COMUN, COMUNES. Espresan el régimen popular local, que tuvo orígen y prevaleció en la Edad media. Abrumados los Monarcas con la prepotencia, no siempre pacífica, de los Grandes, se dedicaron á fomentar el elemento popular, creando y vigorizando

en cada localidad el régimen de los vecinos por ellos mismos: régimen de emancipacion de lo *realengo* sobre lo *señorial*, y que se enuncia y espresa en la historia con las denominaciones, si no siempre sinónimas, análogas, de *municipio*, *comun*, *concejo*, *ayuntamiento*; y son anexas al mismo sistema, al desenvolvimiento y engrandecimiento del poder de la Corona sobre el señorial, las enunciaciones *justicias* y *ayuntamientos*, *justicias reales*.

Algunas veces estas corporaciones locales, y aun el conjunto de los administrados se aliaban para diversos fines, y en forma más ó ménos pacífica, y el conjunto recibia el nombre de *comunes* y de *hermandades*. La coalicion y el grito se llamaban alguna vez *apellidos*, como si digera, convocacion. De todo se dá razon en sus respectivos artículos.

COMUNALES, COMUNES (BIENES DE LOS PUEBLOS). Por el uso á que están destinados, se denominan *comunales*, mas generalmente *comunes* ó *de aprovechamiento comun*, y aun tambien *concejiles*, por pertenecer á los concejos, los bienes propios de los pueblos, que están destinados al uso y aprovechamiento de todos sus vecinos. En sentido lato se comprenden bajo la enunciativa de *comunes*, aun con relacion á los pueblos, y prescindiendo de los que pertenecen al Estado y á varios conducños, diversas clases de bienes, como puede verse en la seccion IV, cap. 3.° del artículo genérico **BIENES**, y en el de **BIENES COMUNES**.

No vamos á tratar aquí de los bienes comunes, que sirviendo para los usos públicos de los pueblos, están fuera del comercio, como las calles, mercados, fuentes, caminos vecinales, etc.; ni tampoco de los llamados de *propios*, porque aun cuando sus productos sirven para cubrir las cargas y atenciones del comun de vecinos, y en tal concepto son tambien comunes, no pueden estos aprovecharse particular é individualmente de ellos. Lo relativo á todos estos bienes puede verse en sus artículos respectivos. En el presente nos limitaremos, como queda ya indicado, á los que, siendo de la propiedad colectiva de los pueblos, ó de una ó varias municipalidades de una misma comarca, están destinados al uso y aprovechamiento comun, libre y gratuito de todos sus vecinos.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. NATURALEZA Y CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS BIENES COMUNES.

SEC. II. RESEÑA HISTÓRICA.

SEC. III. DERECHO ACTUAL SOBRE BIENES COMUNES: REQUISITOS PARA ESCEPTUARLOS DE LA DESAMORTIZACION.

SEC. IV. RÉGIMEN, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES COMUNES.

SECCION I.

NATURALEZA Y CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS BIENES COMUNES.

Para que los bienes de los pueblos sean considerados como *comunales* ó *comunes*, en la acepcion concreta de que tratamos, es indispensable que su uso y aprovechamiento sea *en comun* por todos los vecinos, y además *gratuito*. Estas dos circunstancias los caracterizan, y distinguen de los demás bienes concejiles. Si el aprovechamiento no es completamente gratuito; si se satisface por él algun cánon, pension ó renta para atender á los gastos de la municipalidad, los bienes que se hallan en este caso son reputados como de *propios*, y sometidos por tanto á las leyes y condiciones especiales de estos, aunque en su orígen hubiesen sido comunales ó de aprovechamiento comun. Pierden este carácter mediante á que ya no pueden aprovecharse de ellos los vecinos en comun y gratuitamente; y adquieren la naturaleza de los de propios, por haber sido destinados, como estos, á cubrir las cargas concejiles. Tales bienes dejan de ser y hasta de llamarse *comunes*, y se les dá la denominacion de *arbitrados*, tomándola del nuevo objeto á que se destinan, por los *arbitrios* que sobre ellos es-

tablecen los ayuntamientos, con la debida autorizacion, para cubrir su presupuesto municipal, á falta de otros recursos; y tambien la de *apropiados*, derivándola de su nueva naturaleza, por haber pasado á la clase de *propios*.

Importa mucho deslindar bien esta clasificacion, por la notable diferencia que existe, para los efectos legales, entre los bienes comunes y los de propios. Unos y otros son de la propiedad del municipio; pero son distintos los derechos que el procomun tiene sobre ellos. Como se ha indicado, el uso y aprovechamiento de aquellos pertenece á todos y á cada uno de los vecinos; al paso que no pueden usar de estos, porque sus rentas y productos están destinados á cubrir las cargas del municipio. Además, los bienes de propios están gravados con el impuesto del 20 por 100 á favor del Estado, sujetos al pago de la contribucion territorial, y comprendidos en la desamortizacion y venta; y los comunes están esceptuados de la desamortizacion, y libres de dichos gravámenes.

Tales diferencias han dado lugar á varias cuestiones entre los ayuntamientos y la Administracion general del Estado sobre la naturaleza de los bienes concejiles, pretendiendo aquellos que estos pertenecian á la clase de comunes, para eximirlos de los indicados gravámenes á que la Administracion se creia con derecho. Aunque hubo alguna vaguedad en la resolucion de estas cuestiones, últimamente, por Real órden de 23 de Abril de 1858, se fijó el punto de que tratamos en el sentido antes espuesto. Motivó esta Real órden un espediente instruido en el Ministerio de la Gobernacion, en virtud de diferentes consultas y de dudas ocurridas sobre si las fincas de comun aprovechamiento de los pueblos, cuando son arbitradas por los ayuntamientos para atender á los gastos municipales, debian pagar el 5 por 100 de sus productos, como los demás arbitrios, ó el 20 por 100, impuesto sobre los propios. Este espediente se pasó á informe de las secciones de Gobernacion y Fomento y de Hacienda del Consejo Real, las cuales dilucidaron perfectamente la cuestion, para evitar en lo sucesivo todo género de dudas y consultas sobre la naturaleza de los diferentes bienes de los pueblos. El Gobierno se conformó con este dictámen, y se insertó en dicha Real órden para su puntual cumplimiento, como medida general (1).

Desde entonces quedó aclarado y definido, de acuerdo con el espíritu, y aun tambien con la letra de varias disposiciones antiguas y modernas, que por *bienes comunes* de los pueblos, para todos los efectos legales, solo han de reputarse los que están destinados al

(1) En los *considerandos* de dicho informe, que se insertaron en la Real órden de 23 de Abril de 1858, se definieron y deslindaron con precision y claridad los bienes de los pueblos, que han de considerarse como *comunes* ó de aprovechamiento comun, para todos los efectos legales. Es de tanta importancia este punto, que no debemos prescindir de copiar aquí los cuatro primeros considerandos, que son los que mas conducen á nuestro propósito. Dicen así:

«Considerando que, segun nuestras leyes, nunca debieron ni pudieron reputarse como bienes de *propios* sino aquellos que, perteneciendo al comun de la ciudad ó pueblo, *daban de sí algun fruto ó renta en beneficio del procomunal del mismo*, y de los cuales nadie *en particular* podia usar:

»Considerando que, bajo este concepto es inadmisible la doctrina ó fundamento de las Reales órdenes de 17 de Enero de 1849 y 16 de Noviembre de 1854, ya porque en los reglamentos formados á los pueblos en 1763 por el Consejo de Castilla, no solamente se comprendieron las fincas de propios, sino las del comun que á la sazon estaban arbitradas; *ya porque como bienes comunes* solo se entendian y han debido entenderse siempre, segun las indicadas leyes, aquellos *de que cada vecino de por sí puede usar gratuita y libremente*, que no se han arrendado ni arriendan, y cuyo disfrute ó aprovechamiento, además de *ser comun* á todos los vecinos, *era gratuito*, como se dice en la citada resolucion de 16 de Noviembre de 1854.

»Considerando que los pueblos arbitraban y han arbitrado en todos tiempos, con la competente autorizacion, para cubrir el déficit de su presupuesto, *tierras ó pastos comunes ó de aprovechamiento comun, que es lo mismo*, unas veces arrendando el sobrante de dichos pastos; otras, permitiendo el rompimiento de tierras para repartirlas en suertes entre los vecinos, ó rematarlas en el mejor postor; ya en fin dando facultad para la corta ó entresaca de árboles, rozas y descuajos, *con cuyos arbitrios* obtenian una renta en favor de la *comunidad* del pueblo:

»Considerando que cualquiera que sea ó haya sido el título de adquisicion de tales bienes, *en el hecho de arbitrarse* ó de haber sido *arbitrados*, privándose los vecinos del uso ó comun disfrute de sus aprovechamientos, *dejan ya de ser bienes comunes*, y *adquieren*, aunque sea temporalmente, *el carácter y naturaleza de los de propios*, porque vienen como estos á constituir una renta en beneficio del procomunal.....»

aprovechamiento *comun gratuito* de todos y cada uno de los vecinos: los que estos disfrutan *colectivamente*, como se dijo tambien en Real órden de 2 de Mayo de 1854. Y por otra de 15 de Junio de 1858 se declaró que el adverbio *colectivamente*, no significa la obligacion de que todos y cada uno de los vecinos ó comuneros hayan de disfrutar precisamente de los bienes comunes, para que éstos sean considerados como tales; sino los que quieran verificarlo, por ser una cosa beneficiosa, y por lo tanto renunciable.

Como pudiera suceder que los terrenos arbitrados, ó arrendados temporalmente, hubieran vuelto á ser destinados al aprovechamiento comun y gratuito de los vecinos, conveniente era fijar un plazo para evitar cuestiones, y así se hizo, para el efecto de esceptuarlos de la desamortizacion, por el art. 53 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855, y por el art. 4.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865. A dicho efecto debe acreditarse «que el aprovechamiento de los terrenos ha sido libre y gratuito para todos los vecinos en los 20 años anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855, y hasta el dia de la peticion, sin interrupcion alguna.»

De acuerdo con estas disposiciones y con la Real órden antes citada de 23 de Abril de 1858, se ha fijado la jurisprudencia por el Consejo de Estado en el sentido que hemos espuesto, y lo mismo por la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia, que lo reemplazó en el conocimiento de lo contencioso-administrativo. En cuantas cuestiones se han ventilado sobre sí ciertos bienes de los pueblos eran de propios ó comunes, se ha declarado que, para estimar como comunales ó de aprovechamiento comun unos terrenos es requisito indispensable, que durante los 20 años anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855 y despues, ó sea desde 1835 en adelante, se vengan disfrutando comunal, libre, y gratuitamente por los vecinos, sin que hayan sido arbitrados, cedidos ni arrendados; ó sin que hayan satisfecho el 20 por 100 de propios, ni el 5 por 100 de arbitrios, pues cualquiera de estos pagos demuestra que han estado arrendados ó arbitrados, y por tanto han perdido el carácter de comunes, si lo tuvieron (1). Pero no pierden este carácter porque se haya arrendado ó vendido temporalmente alguna parte de los productos, si esto se ha hecho sin perjuicio de los demás aprovechamientos que disfrutaran los vecinos del pueblo (2).

La circunstancia de haber sido cultivados los terrenos por los vecinos no obsta para que se consideren comunales ó de aprovechamiento comun, siempre que lo verifiquen sin pagar renta, ni haberlos arrendado ni arbitrado, y que sea comun y gratuito para ellos su disfrute (3); pero no en el caso de haber satisfecho alguna renta (4).

Tampoco puede darse á los bienes aquel carácter, si los terrenos se han repartido por lotes á la suerte entre los vecinos, para que el que resultase agraciado cultivara por cierto número de años la porcion que le correspondia, sucediéndole despues otro vecino en la propia forma, en razon á que esta especie de labranza y cultivo por personas determinadas, utilizando esclusivamente señaladas porciones de la finca por cierto tiempo, escluyen por su naturaleza la circunstancia, exigida por la ley, de aprovechamiento libre y comun por todos los vecinos. Así lo ha declarado el Consejo de Estado (5), citando, entre otras disposiciones generales, una Real órden de 7 de Marzo de 1862, que, resolviendo un caso particular, desestimó cierta solicitud de escepcion de una parte de monte en concepto de aprovechamiento comun, *por ser terreno labrantío, y por consiguiente destituida del carácter comunal que se le atribuia.* Nos pa-

(1) Reales decretos-sentencias del Consejo de Estado de 11 de Enero y 10 de Abril de 1867, 28 de Febrero, 4 de Marzo y 30 de Junio de 1868, y otros; y sent. de la Sala tercera del Trib. Supremo de Just. de 27 de Octubre de 1869.

(2) Real dec.-sent. de id. de 25 de Octubre de 1867.

(3) Sent. de la Sala 3.ª del Trib. Sup. de Just. de 23 de Abril de 1869.

(4) Real dec.-sent. del Consejo de Estado de 4 de Mayo de 1868, en pleito á instancia del ayuntamiento de Oropesa.

(5) Otro Real dec.-sent. de 4 de Mayo de 1868, en pleito á inst. de los pueblos de Pinilla de Trasmonte y Cilleruelo de arriba.

rece, sin embargo, que no es lógica esta consecuencia. La circunstancia de ser labrantío el terreno no se opone á que sea comunal, como lo ha declarado despues la Sala 3.ª del Tribunal Supremo en la sentencia antes citada, y como se deduce de la definicion que se hizo de los baldíos de aprovechamiento comun en Real cédula de 22 de Julio de 1819, de que luego hablaremos. Tampoco obsta, en nuestro concepto, el que los terrenos se dividan para el cultivo por hojas, lotes, ó de otro modo, y que se repartan á la suerte, como ha venido haciéndose en muchos pueblos por reglamento, por costumbre ó por convenio entre los vecinos, y como ahora se establece por la ley municipal vigente, segun se espondrá en la seccion IV de este artículo. Siempre que todos los vecinos tengan igual derecho, que es lo que constituye el uso comun, y que el aprovechamiento sea libre y gratuito, no puede negarse á los bienes el carácter de comunales, como se ha declarado con repeticion: la forma de utilizarlos no altera su naturaleza: en cada pueblo se ha adoptado la que se ha creido mas conveniente para la buena armonía entre los vecinos, y para que todos disfruten con igualdad de ese derecho.

Queda, pues, demostrado que, tanto por la ley como por la jurisprudencia, para que los bienes de los pueblos tengan la naturaleza y carácter legal de *comunales* ó *comunes*, son requisitos indispensables que estén y hayan estado destinados al aprovechamiento comun de todos y cada uno de los vecinos, ya de un pueblo, ya de dos ó más, si están mancomunados en ese derecho, y que este aprovechamiento sea libre y gratuito. La falta de alguno de estos requisitos, por cualquier motivo que sea, les hace perder dicho carácter, si lo tuvieron. Y aun debemos añadir que los bienes han de ser fincas rústicas, ó derechos reales sobre ellas establecidos, como aguas, pastos, arbolado, abrevaderos y demás servidumbres rústicas, segun lo demuestran la índole misma y la naturaleza y objeto de ese derecho, como tambien el orígen y vicisitudes de tales bienes, que vamos á esponer en la seccion siguiente.

SECCION II.

RESEÑA HISTÓRICA.

La historia de los bienes comunales de que tratamos, es la historia de los *baldíos*: tienen un mismo orígen y fueron una misma cosa, con raras escepciones. Por regla general los vecinos de los pueblos se aprovechaban de los productos naturales de todos los baldíos, aunque fuesen de realengo, esto es, de los pastos del suelo y de las leñas, maderas y frutos de los árboles, pues como terrenos incultos no producian otra cosa. En confirmacion de este hecho puede verse, entre otras, la ley 2, tít. 23, lib. 7 de la Nov. Rec., segun la cual el rey D. Felipe III se obligó, por sí y sus sucesores, bajo la fé y palabra Real, á no vender ni enajenar tierras baldías, ni árboles, ni frutos de ellos, sino que quedaria siempre lo uno y lo otro para el uso y aprovechamiento de todos los súbditos y naturales del reino; cuya obligacion contrajo como condicion exigida por las Córtes reunidas en Madrid en 1609, en cambio del servicio de diez y siete millones y medio que le concedieron. Además, muchos *baldíos de realengo* pasaron á ser de la propiedad particular de los pueblos, por donaciones de los reyes despues de la reconquista, y aun tambien de los señores feudales, y por compras que hicieron los mismos pueblos, convirtiéndose así en bienes comunes ó de aprovechamiento comun. Véase, por tanto, **BALDIOS.**

Cuando los concejos y ayuntamientos se vieron en la necesidad de arbitrar recursos para cubrir sus gastos municipales, echaron mano de los baldíos, arrendando los pastos y los frutos de los árboles, vendiendo leñas y maderas, ó cediendo los terrenos á particulares, mediante un cánon, para su roturacion y cultivo; si bien reservando la parte necesaria para los usos de los vecinos (1).

(1) Por el art. 18 de la instruccion, dada en 1760, para el gobierno, administracion, cuenta y razon de los propios y arbitrios de los pueblos (ley 13, tít. 17, lib. 7.º de la Nov. Recop), pues-

Los baldíos *arbitrados* de este modo se convirtieron en bienes de *propios*, como ya hemos indicado, y solo conservaron el carácter específico de *comunes* los que siguieron destinados al uso y aprovechamiento comun. Véase **PROPIOS**.

Con los adelantos de la ciencia económica se comprendió la conveniencia, para la riqueza pública, de reducir á cultivo los inmensos terrenos que permanecian incultos y sin dar otros productos que los naturales. Con este objeto se dictaron varias disposiciones en el reinado del Sr. D. Cárlos III, que fueron refundidas, dejando sin efecto las anteriores, en la Real provision de 26 de Mayo de 1770 (1), por la cual se dieron reglas para el repartimiento de los terrenos de propios y concejiles, si bien respetando los aprovechamientos comunes. Tambien se han dictado despues otras varias, especialmente en las épocas en que ha regido el gobierno constitucional, de las que no nos ocupamos en este lugar, por corresponder á otros artículos (2). Basta á nuestro propósito consignar, que por el art. 1.° de la ley de 6 de Mayo de 1855 se ordenó lo siguiente:

«Son propiedad particular las suertes que, de terrenos baldíos, realengos, *comunes*, propios y arbitrios, se repartieron con las formalidades prescritas en la real provision de 26 de Mayo de 1770, y decretos de las Córtes de 4 de Enero de 1813, 29 de Junio de 1822, 18 de Mayo de 1837, y las que bajo las mismas reglas se repartieron tambien por los ayuntamientos y juntas durante la guerra de la independencia (1).»

No sólo se aprobaron los repartimientos, sino tambien las ventas, ya en pleno dominio y ya enfitéusis, hechas de dichos terrenos, á cuyo recurso tuvieron que acudir muchas veces los ayuntamientos para cubrir sus cargas y obligaciones, como se ha indicado, especialmente durante la guerra de la independencia. Y como algunas de ellas se habian dejado sin efecto, para resolver las reclamaciones hechas con tal motivo, por el artículo 1.° de la Real órden de 6 de Marzo de 1834, se mandó lo siguiente: «Todas las enagenaciones de fincas de propios, *comunes* y baldíos, hechas desde 1.° de Mayo de 1808, hasta 1.° de Enero de 1814, que hubiesen sido declaradas subsistentes por el Consejo Real, por los intendentes, ó por las justicias con acuerdo de asesor, hasta que se recibió en cada pueblo el Real decreto de 3 de Abril de 1824, en que se estableció un nuevo órden para los juicios de propios, y las que hayan sido aprobadas desde esta última fecha por el Consejo de Hacienda y por los intendentes, relativas á la misma época, serán válidas, y sus poseedores quedarán en el pleno dominio que les corresponde, con tal que no hayan sido reclamadas por parte legítima en tiempo hábil.» Y por los artículos siguientes se dieron reglas para que los compradores, que habian sido desposeidos gubernativamente, fueran reintegrados en la plena propiedad; sin retribucion alguna si compraron en pública subasta y prévia tasacion, y en otro caso mediante un cánon anual perpétuo á favor de los propios del pueblo, equivalente al rendimiento en el año comun de un quinquenio, ó al 2 por 100 del capital de la finca.

---

tos bajo la direccion del Consejo de Castilla por Real decreto de 30 de Julio de dicho año, se ordenó, que «en los pueblos, en donde los propios no alcancen á cumplir sus obligaciones, procurará el Consejo con el sobrante de arbitrios comprarle algun propio, equivalente á que tenga la dotacion que necesita; *de modo que no se vea precisado á valerse de otros medios, que perjudiquen la libertad y disfrute de los comunes á los vasallos....*» Varias disposiciones se habian dictado anteriormente, desde el tiempo de los Reyes Católicos, y aun antes, para la conservacion de los terrenos *comunes ó baldíos*, prohibiendo el rompimiento de tierras, y las cesiones ó mercedes de los mismos, y para la restitucion de los que habian sido donados ó usurpados. Pueden verse las leyes 1.ª á 10, tit. 21; 1.ª y 2.ª, tít. 23, y 4.ª, tít. 25, lib. 7.° de la Nov. Recop.

(1) Es la ley 17, tít. 25, lib. 7.° de la Novísima Recopilacion.

(2) Véanse, además de los ya citados, los de ACOTAMIENTO, POBLACION RURAL, REPARTIMIENTO DE TERRENOS, y ROTURACIONES, y la ley de 21 de Noviembre de 1855, sobre establecimiento de colonias agrícolas para reducir á cultivo los terrenos baldíos y realengos.

(1) Por el art. 6.° del real decreto de 10 de Julio de 1865, se concedió á todos los comprendidos en esta disposicion el plazo improrogable de seis meses para obtener el título de adquisicion, trascurrido el cual se entenderia que habian renunciado á su derecho, y se considerarian los terrenos sujetos á la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Aunque todas estas disposiciones comprenden los *terrenos comunes*, se esceptuaron sin embargo en algunas de ellas, pues otras hablan en general, los destinados al aprovechamiento comun de los vecinos. Así se hizo espresamente por Real decreto de 5 de Agosto de 1818 al decretar la consolidacion de la deuda del Estado: se destinó á la amortizacion de la misma el producto de la venta de los baldíos de realengo, como se hizo tambien en el arreglo de dicha deuda de 1851, y el de la habilitacion de los apropiados, pero escluyendo los de aprovechamiento comun. En la Real cédula de 22 de Julio de 1819, que contiene la instruccion para la venta de los baldíos con dicho objeto, se dijo lo siguiente:

«Entendiéndose que se han de comprender bajo el nombre de *terrenos arbitrados y apropiados*, para el efecto de eximirse de la venta aquellos que lo hubiesen sido con autoridad mia, de mis predecesores, ó del Consejo Real; y bajo la de *baldíos de aprovechamiento comun de los pueblos*, los que estos necesiten para sus ganados propios, y no forasteros, como no tengan comunidad de pastos; para sembrar, conservando la alternativa de año y vez, y no más; y para cortar maderas ó leñas para sus usos, y no para negociarlas.»

Todas estas vicisitudes han contribuido á la diminucion de los bienes de aprovechamiento comun. Los que existian en 1855 fueron respetados, esceptuándolos de la venta, al decretarse la desamortizacion general, y aun se aumentaron con las dehesas boyales, como se dirá en la seccion que sigue, al esponer la legislacion hoy vigente sobre la existencia de dichos bienes.

SECCION III.

DERECHO ACTUAL SOBRE BIENES COMUNES: REQUISITOS PARA ESCEPTUARLOS DE LA DESAMORTIZACION.

Las leyes desamortizadoras habian respetado los bienes de los pueblos, tanto los de propios, como los comunes, hasta que se decretó la desamortizacion general, civil y eclesiástica, por la de 1.° de Mayo de 1855. Entre los bienes declarados en estado de venta por el art. 1.° de esta ley, se comprendieron espresamente todos los prédios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes á *los propios y comunes de los pueblos*; y entre las varias escepciones de esta medida, consignadas en el art. 2.°, se hallan *los terrenos que eran entonces de aprovechamiento comun*. Aparece, por tanto, que dicha ley hizo distincion entre bienes *comunes* y de *aprovechamiento comun*, separándose de la tecnologia hasta entonces admitida, que los consideraba como una misma cosa; distincion de grave trascendencia, toda vez que aquellos habian de sacarse á la venta, y éstos quedaban esceptuados de la desamortizacion.

Esta novedad, introducida por la comision de las Córtes, al ponerse á votacion el art. 1.° de dicha ley, agregando la palabra *comunes*, que no existia en su proyecto ni en el del Gobierno, pues solo hablaban de *propios* en dicho artículo, y sobre estos versó la discusion, fué objeto de sérias impugnaciones al discutirse el art. 2.°, por la inconveniencia y contradiccion que envolvia el declarar en estado de venta los mismos bienes que despues se esceptuaban, en razon á ser sinónimas las denominaciones de bienes *comunes* y *de aprovechamiento comun*. Mas, de las esplicaciones que dieron el Gobierno y la comision se deduce, que no se propusieron hacer novedad alguna en la clasificacion de los bienes pertenecientes á los pueblos, y que la adicion de *comunes* á la de *propios* solo tuvo por objeto evitar los abusos y ocultaciones que pudieran cometer los pueblos «en el sentido de que se declaren bienes comunes, para que se esceptúen de la desamortizacion aquellos que sean de propios.» Así lo dijo el Ministro de Hacienda: y la verdad es que, en la aplicacion de la ley, tanto el Gobierno como el Consejo de Estado, se han sujetado á la antígua clasificacion, declarando esceptuados de la venta los bienes rústicos comunes, ó sean los de aprovechamiento comun, libre y gratuito de todos los vecinos, como hemos espuesto en la seccion I del presente artículo, y segun allí los hemos definido; y declarando desamortizados todos los de propios, y los

procedentes de comunes que habian sido arbitrados ó apropiados.

De consiguiente, los pueblos conservan hoy solamente los *terrenos comunes*, que disfrutaban en 1.° de Mayo de 1855, y que entonces, lo mismo que ahora, estaban destinados al uso y aprovechamiento comun, libre y gratuito de todos los vecinos. Además, existian otros bienes destinados esclusivamente al pasto del ganado de labor, conocidos con el nombre de *dehesas boyales*, y donde no las habia, solian destinarse á este uso las rastrogeras y pastos naturales de todos ó parte de los propios, ó de los comunes apropiados, sobre los cuales el pueblo se habia reservado ese gravámen. Pero, como estos bienes no podian aprovecharse por todos los vecinos, sino solo por los que tuvieran ganado de labor, aunque todos aquellos tenian igual derecho, se dudó, sin embargo, si estaban comprendidos en los de aprovechamiento comun, esceptuados de la desamortizacion. Para resolver esta duda, y en vista de la conveniencia de acceder á las justas reclamaciones de los pueblos, por el art. 1.° de la ley de 11 de Julio de 1856, se declaró tambien esceptuada de la venta «la dehesa destinada ó que se destine de entre los demás bienes del pueblo al pasto del ganado de labor de la misma poblacion, caso de no tenerla esceptuada por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo.» Aunque estos bienes eran tambien comprendidos entre los comunes, como tienen un objeto y denominacion especial, el método de la ENCICLOPEDIA exije que tratemos de ellos en su artículo correspondiente. Véase DEHESA BOYAL.

A la vez que se esceptuaron de la desamortizacion los terrenos de aprovechamiento comun por la disposicion antes citada, se mandó que para ello habia de preceder la declaracion de ser de dicha clase los bienes reclamados, hecha por el Gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputacion provincial respectivos; y que cuando aquel no se conformare con el parecer, en que estuvieren de acuerdo estas dos corporaciones, antes de dictar su resolucion debia oir al Consejo de Estado. Esta audiencia es indispensable en dicho caso, como requisito esencial, tanto que su omision produce la nulidad de la Real órden resolutoria, y debe reponerse el espediente al estado que tenia al dictarse esta, para que se subsane dicha falta (1).

Por el art. 53 de la instruccion de 31 de Mayo de 1855 se dispuso que «si se suscitare duda ó reclamacion por parte de los legítimos interesados sobre que se considere cómo del *comun* una finca comprendida en la clase de *propios*, será objeto de un espediente, que se instruirá con todos los antecedentes que puedan aclarar su verdadera naturaleza, circunstancias del prédio, época ú orígen de su posesion y en virtud de qué título. Este espediente contendrá el informe del ayuntamiento, manifestando si se ha aprovechado de 20 años acá por el comun de vecinos. Así mismo se oirá á la parte fiscal, como representante de la Hacienda, y á la diputacion provincial. Terminado el espediente, se pasará original por el gobernador, con su dictámen, á la Direccion para que el gobierno resuelva lo que proceda,» oyendo préviamente al Consejo de Estado, si no se conformare con el parecer de la diputacion y ayuntamiento, cuando estén de acuerdo estas dos corporaciones.

De lo dicho resulta que para esceptuar de la venta los bienes de aprovechamiento comun debia instruirse el oportuno espediente, en el que recayera la resolucion del Gobierno. No se habia fijado plazo para deducir estas reclamaciones, las cuales se admitian por tanto en todo tiempo, aun despues de realizada la venta de las fincas, cuya nulidad era imprescindible, por versar aquella sobre bienes que no podian venderse conforme á la ley, si se declaraba que pertenecian á la clase de comunes. Para evitar la perturbacion y perjuicios que de ello resultaban al Estado y á los compradores, por los arts. 1.° y 2.° del Real decreto de 10 de Julio de 1865 se dispuso, que el derecho de los ayuntamientos para reclamar dichas escepciones y las de dehesa boyal, solo podria ejercitarse en adelante respecto de

(1) Reales decretos-sents. del Consejo de Estado de 16 de Marzo de 1864, 27 de Diciembre de 1866, 1.° de Enero de 1867, y otros.

las fincas que no hubieran sido enajenadas, y hasta el acto del remate; y en cuanto á las vendidas antes de esta disposicion, podrian reclamar en el único caso de no haber tenido conocimiento de la venta, ni de los actos preliminares de la misma (1).

Con esta disposicion no se evitaron los indicados perjuicios, y fué necesario dictar otra fijando un plazo improrogable para deducir dichas reclamaciones, trascurrido el cual se consideraria caducado el derecho de los pueblos. Así se hizo por Real decreto de 23 de Agosto de 1868, fijando el término preciso de cuatro meses, contados desde la publicacion de dicho decreto en el *Boletin oficial* de la provincia respectiva. Y para cerrar difinitivamente la puerta y evitar fraudes, se dispuso á la vez, que las reclamaciones se presentaran en el gobierno de la provincia; que los administradores de Hacienda las anotaran en un registro especial por el órden de su presentacion; que trascurrido el plazo antedicho, remitiesen á la Direccion general una relacion de las solicitudes presentadas; y que esta relacion se publicara en el *Boletin oficial*, concediendo el término de 15 dias para reclamar contra cualquiera omision que pudiera haberse cometido. Y al propio tiempo se ordenó que, aunque se solicitasen escepciones en concepto de aprovechamiento comun, se pidiera y designara á la vez la concesion de dehesa boyal, por si aquella solicitud fuese denegada, en cuyo caso debia ordenar la Direccion general del ramo que no se enajenara la finca pretendida en este concepto.

Por dicho decreto se ha pretendido fijar la suerte de los pueblos respecto á sus bienes de aprovechamiento comun. Segun él, ha caducado ya el derecho para hacer nuevas reclamaciones: de consiguiente, no hay en el dia mas bienes comunes para los pueblos que los que ya estén disfrutando, y los que puedan obtener de los que hayan reclamado en tiempo oportuno. Así las cosas seria conveniente, para evitar las ocultaciones y abusos que, con razon ó sin ella, se han atribuido á tiempos pasados, que el Gobierno dispusiera la formacion de un inventario general con descripcion circunstanciada de todos ellos, haciendo inscribir en el registro de la propiedad los que no lo hayan sido, y como ha debido verificarse en cumplimiento de lo mandado por Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 (1) y Reales órdenes de 1.° de Febrero del mismo año y 2 de Enero de 1865.

Pero, aunque ya no pueden deducirse nuevas solicitudes, existen todavia muchas pendientes de instruccion ó de resolucion: pudiera tambien concederse alguna nueva próroga, como se ha hecho en otras ocasiones; y por todo ello creemos conveniente esponer aquí la instruccion que ha de darse á dichos espedientes, los efectos de la resolucion que en ellos recaiga, y los recursos que pueden utilizarse, tanto mas cuanto que la omision de las formalidades prevenidas en dicha instruccion es motivo de nulidad, como ya se ha indicado, é impide el recurso en la via contenciosa (2).

Reglas para los espedientes de escepcion de la venta.—Por falta de reglas precisas se daba generalmente una instruccion defectuosa á estos espedientes, siendo imprescindible devolverlos repetidas veces á las provincias para que se subsanasen las faltas cometidas. Esto obligó á la Direccion general del ramo á formular dichas reglas de acuerdo con las disposiciones vigentes, como lo hizo en circular de 4 de Agosto de 1860. Segun ella, en los espedientes de escepcion de la venta para aprovechamiento comun debe consignarse lo siguiente:

«1.° La cabida del terreno, cuya escepcion se pretenda, usando de la medida marcada en el sistema métrico.

2.° La verdadera naturaleza del prédio, cuya no venta se pretenda, sus circunstancias, época ú orígen de su posesion por el comun de vecinos, y testimonio del título en virtud del cual se hallan poseyéndolo.

(1) Véase dicho Real decreto en la sec. 1.ª de la *parte legislativa* del artículo COMPRA-VENTA DE BIENES NACIONALES, pág. 52 de este tomo.

(1) Véase en la página 50 de este tomo.

(2) Real dec.-sent. del Consejo de Estado de 16 de Julio de 1863.

3.° Si además de los terrenos, cuya escepcion se pretenda, tiene el pueblo otros, ya sean de propios aun no enajenados, ya que se aprovechen mancomunadamente en su término ó en el de cualquier pueblo limítrofe.

4.° Un certificado espedido por el secretario del gobierno de la provincia, en el que se haga constar, con referencia á las cuentas municipales del respectivo pueblo, si los terrenos, cuya escepcion se solicite, han sido arrendados ó arbitrados desde 1835 á 55 y pagado el 20 por 100 de propios.

5.° El informe de la diputacion provincial.

6.° El del fiscal de Hacienda (hoy el del juzgado ordinario).

7.° El de la junta provincial de ventas.

Y 8.° El gobernador al remitir el espediente, llenados estos requisitos, emitirá su dictámen.»

A pesar de las anteriores reglas, siguieron instruyéndose los espedientes con defectos notables, que era preciso subsanar, dilatando su resolucion. Por ello la propia Direccion general se vió en la necesidad de dirigir á sus dependencias una nueva circular en 2 de Octubre de 1862, recordándoles las disposiciones que debian tener presentes, y muy especialmente la Real órden espedida por Gobernacion en 23 de Abril de 1858, de que se ha hecho mérito en la seccion 1.ª del presente artículo, para que la calificacion sobre si los bienes reclamados eran de aprovechamiento comun se ajustase á la doctrina en ella establecida. Y á la vez, para la mas exacta aplicacion de dichas reglas, en cuanto á los indicados bienes, se hicieron las advertencias siguientes:

«1.° Que los títulos para acreditar el orígen y posesion de los terrenos han de venir compulsados con asistencia del fiscal de Hacienda (hoy el del juzgado ordinario), al tenor del artículo 1340 de la ley de Enjuiciamiento civil; debiendo préviamente traducirse á la lengua castellana aquellos que fueren escritos en otro idioma ó dialecto.

2.° Que á falta de dichos títulos, cuya carencia deben declarar los ayuntamientos bajo su responsabilidad, procede la informacion testifical ante el juzgado de 1.ª instancia del partido, con audiencia del fiscal de Hacienda (1), conforme al título 8.° (de la 2.ª parte) de la citada ley de Enjuiciamiento civil, sin que pueda ser válida si no recae en ella el auto aprobatorio del mismo juez.

3.° Que cuando solo pertenece á los pueblos reclamantes el dominio útil de los terrenos, debe oirse á los copropietarios ó señores del dominio directo, para que en un término breve puedan esponer lo que á sus derechos convenga, exhibiendo en su caso los títulos que justifiquen estos, compulsados segun se ha dicho antes.

4.° Que los certificados de los secretarios de los gobiernos de provincia, con relacion á las cuentas municipales *y á los espedientes y demás datos que puedan consultarse*, deben ser espresivos y terminantes de las fincas de que se trate, para saber si fueron ó no arrendadas ó arbitradas, en todo ó en parte y de cualquiera forma, en los 20 años desde 1835 á 1855, ambos inclusive, adoptando en su caso el empleo de comisionados hasta conseguir la rendicion de las cuentas, que no se hayan presentado por los municipios, para poderse referir á ellas.

9.° Que se haga constar, por medio de informe del administrador y comisionado del ramo, lo que resulte en sus respectivas oficinas sobre la procedencia de los bienes que se soliciten, y si fueron ó no vendidos por el Estado.

10. Que en el caso de haber sido enajenados, se dé audiencia al comprador ó compradores, para que en un término prudente é improrogable puedan alegar lo que á sus derechos estimen.

11. Que tanto las juntas provinciales de ventas, como los gobernadores, no dejen de consignar su propio y razonado informe.

12. Y por último, que los espedientes de-

(1) Del partido á que corresponda el pueblo que reclame, con intervencion del promotor fiscal del mismo. Declaracion hecha por la propia Direccion del ramo, en circular de 18 de Junio de 1864.

ben acompañarse foliados por el órden cronológico de las fechas de sus documentos é informes, y bajo un índice cada uno.»

Con estas advertencias y las reglas antes consignadas, queda bien determinada la instruccion que ha de darse á los espedientes de que se trata. Además, por el art. 4.° del Real decreto de 10 de Julio de 1863 se declaró, que son condiciones indispensables para conceder la escepcion por ser los terrenos de aprovechamiento comun, que el ayuntamiento reclamante acredite dos cosas: 1.° La propiedad que tenga el pueblo en el terreno solicitado; y 2.° que el aprovechamiento de los terrenos ha sido libre y gratuito para todos los vecinos en los 20 años anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855 y hasta el dia de la peticion, sin interrupcion alguna. Nada se dispuso acerca de la forma en que habian de acreditarse estos dos requisitos, y de consiguiente se dejaba en vigor la jurisprudencia establecida, de acuerdo con las prevenciones antes consignadas y con el derecho comun, de suplir la falta de títulos con las informaciones judiciales.

Pero la citada Direccion general del ramo, al circular á sus dependencias, en 26 de Agosto del propio año, dicho Real decreto, les previno que para acreditar la propiedad de los terrenos debian acompañarse «los *títulos originales ó sus copias*, debidamente autorizadas, que compulsarán los fiscales ó los funcionarios en quienes deleguen.» Prescindiendo de la impropiedad en encargar á los fiscales la compulsa ó cotejo de los documentos, cuya diligencia corresponde al juez y escribano, si bien debe hacerse con asistencia de aquellos, en representacion de la Hacienda, para asegurarse de su exactitud; lo que se previene respecto de la presentacion de los títulos originales ó sus copias, debe entenderse para el caso de que existan: si nó exisisten, podrá suplirse su falta con la informacion judicial, en la forma indicada en la prevencion 2.ª de la circular de 2 de Octubre de 1862. Así lo tiene admitido el Consejo de Estado, estimando como válida una informacion de dicha clase, en una sentencia posterior al citado Real decreto de 10 de Julio de 1865, y haciendo aplicacion del mismo (1).

En la propia circular de 26 de Agosto de 1865 se previno, que además de los títulos de propiedad, deben acompañarse «certificados espedidos por los secretarios de ayuntamiento, y V.° B.° de los alcaldes, de cuanto resulte, con relacion á las fincas de que se trate, en el catastro de 1752, en los padrones de riqueza, amillaramientos y repartos de la contribucion territorial de los veinte años anteriores al de 1855, y de los posteriores hasta la fecha de las solicitudes, espresando siempre la cuota señalada á cada finca ó terreno, á quien fuera impuesta y por quien se satisfizo. Por las administraciones principales de Hacienda pública se examinarán estas certificaciones, consignando á continuacion su conformidad, ó los errores ú omisiones que observen con mérito á los datos existentes en las mismas.»

Y además, «como medio de justificar el disfrute libre y gratuito de los terrenos de aprovechamiento comun y dehesas boyales, durante el período que fija la condicion 2.ª del artículo 4.° del referido Real decreto, acompañarán tambien los ayuntamientos otro certificado, con referencia á las cuentas municipales y á los contratos y espedientes de subasta, de cuanto resulte respecto al arbitraje ó arriendo de cada uno de aquellos. Los secretarios de los gobiernos de provincia certificarán á su vez la conformidad de dichos certificados, ó lo que aparezca en contrario de los datos que deben consultar al efcto.»

Al propio tiempo, en Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al de Gobernacion en 24 del mismo Agosto de 1865, se consignó, que á fin de apreciar con equidad y justicia el carácter distintivo de los terrenos de aprovechamiento comun, convenia acreditar en los espedientes promovidos, ó que en lo sucesivo promovieran los pueblos, el arriendo ó arbitraje de aquellos terrenos, sea cualquiera el modo y forma en que haya

(1) Decreto-sent. del Consejo de Estado de 28 de Julio de 1868, en pleito á instancia de D. Isidoro Gomez Balugera, publicada de órden del Gobierno provisional en la *Gaceta* del 26 de Diciembre del mismo año.

podido verificarse; y que «al efecto es necesario consultar con sumo cuidado y preferencia las cuentas municipales de los ayuntamientos y los demás antecedentes que existan en los gobiernos de provincia, para que los secretarios espidan con acierto las oportunas certificaciones de lo que resulte con relacion á las fincas de que se trate.» Concluye esta Real órden recomendando la mayor exactitud y eficacia en tan importante asunto.

En las disposiciones que quedan espuestas, se encuentran designados todos los documentos y demás datos que deben contener, en cada caso, los espedientes para esceptuar de la venta los terrenos de aprovechamiento comun, á fin de que esté completa la instruccion de los mismos. Y aun debemos advertir que corresponde al ayuntamiento respectivo promover la formacion del espediente, pues solo los ayuntamientos, como representantes de los intereses del procomun, y no los vecinos de por sí, y ni aun los alcaldes están autorizados para solicitar dicha escepcion (1).

Como la falta ú omision de cualquiera de dichos datos entorpece la resolucion del espediente, y hasta es motivo de nulidad, será muy útil tener á la vista el resúmen de lo que, segun las disposiciones citadas, debe contener para su completa instruccion. Es lo siguiente:

Solicitud del ayuntamiento, por conducto del gobernador de la provincia

Títulos de propiedad, originales ó por copia compulsada: si no existen, declaracion del ayuntamiento, bajo su responsabilidad, de carecer de ellos, y el motivo, y una informacion judicial supletoria.

Certificacion de los peritos sobre la clase, denominacion, cabida y linderos de la finca ó fincas.

Otra del secretario del ayuntamiento, con el V.° B.° del alcalde, de lo que resulte del catastro de 1752, y de los amillaramientos y repartos de la contribucion territorial desde 1855, sobre los terreños de que se trate; y la comprobacion de ello por la administracion de Hacienda.

Otra del mismo, con referencia á las cuentas municipales y á los contratos y espedientes de subasta, de cuanto resulte respecto al arbitraje ó arriendo de cada finca, tambien desde 1835, ó si el aprovechamiento de los vecinos ha sido libre y gratuito.

Informe del ayuntamiento, manifestando si el comun de vecinos se ha aprovechado de los terrenos en dicho período, y si además de los reclamados tiene el pueblo otros de aprovechamiento comun en su término ó en los inmediatos: este informe, en el caso de no haber consignado los hechos en la solicitud.

Certificacion del secretario del gobierno de la provincia sobre si las fincas estuvieron arrendadas ó arbitradas desde 1835, y si es ó no conforme lo que resulte sobre este estremo de la del secretario del ayuntamiento.

Audiencia al dueño directo, si solo pertenece al pueblo el dominio útil.

Informe de la administracion de Hacienda y del comisionado de ventas, sobre la procedencia de los bienes, y si han sido ó no vendidos por el Estado.

Si han sido vendidos, audiencia al comprador.

Dictámen del fiscal del juzgado.

Acuerdo é informe de la diputacion provincial.

Id. de la junta provincial de ventas.

Informe del gobernador, hoy del jefe económico de la provincia, con remision del espediente á la Direccion de propiedades y derechos del Estado.

La resolucion de estos espedientes corresponde á la junta superior de ventas (1). Contra sus acuerdos procede el recurso de alzada, dentro de 60 dias, para ante el Ministro de Hacienda. Si la resolucion de este, que ha de dictarse de Real órden, es denegatoria de la solicitud, causa estado en la vía adminis-

(1) Reales decretos-sentencias del Consejo de Estado de 30 de Enero de 1868, en pleito promovido por D. Diego Montalvo; 20 de Julio de 1868, en el promovido por el ayuntamiento de Málaga del Fresno, y 25 del mismo mes y año, en el promovido por el alcalde y síndico de Segovia y otros pueblos.

(1) Art. 96, núm. 1.° de la instruccion de 31 de Mayo de 1855.

trativa (1); pero puede entablarse contra ella la vía contenciosa, hoy ante la Sala 4.ª del Tribunal Supremo. Y si es favorable á la escepcion, no produce aquel efecto; sino que procede la revision del espediente siempre que aparezcan despues nuevos datos, de los cuales resulte que no concurrian en la finca las condiciones necesarias para esceptuarla de la venta, en cuyo caso, oida la seccion de Hacienda del Consejo de Estado, podrá acordarse la venta de la finca (2). Téngase además presente que, como ya se ha dicho, el Gobierno no puede resolver en contra del parecer del ayuntamiento y de la diputacion, cuando sea unánime, sin oir préviamente á dicho Consejo (3).

Véase tambien la doctrina espuesta en el §. 8.º seccion IX, del artículo **COMPRAVENTA DE BIENES NACIONALES**, pues es aplicable á los espedientes de que tratamos, que son considerados como incidencias de las ventas, cuanto allí se dijo acerca de los recursos que proceden y términos para interponerlos, como asimismo respecto á los casos en que debe suspenderse la venta de la finca reclamada.

Téngase presente, por último, que corresponde á los gobernadores, hoy á los jefes económicos, á propuesta de los administradores y comisionados de ventas, el nombramiento de los peritos que midan y clasifiquen los terrenos, cuya escepcion hayan solicitado los ayuntamientos; sin perjuicio de que estos puedan elegir por su parte otros peritos, que concurren con aquellos á la operacion (4).

Tanto los derechos de los peritos, que deberán ajustarse al arancel que rije para el justiprecio de bienes nacionales, como los demás gastos que ocasionen estos espedientes, son de cuenta de los ayuntamientos interesados (5). Los de los espedientes de ventas anuladas á consecuencia de las reclamaciones de escepcion, son tambien de cargo del ayuntamiento respectivo, si este incluyó la finca en la relacion de las de propios, no obstante ser de aprovechamiento comun: en otro caso, debe resolverse este punto conforme á las circunstancias que en él concurran (1).

(1) Art. 3.º del Real decreto de 10 de Julio de 1865.
(2) Art. 5.º de id.
(3) Art. 2.º núm. 9 de la ley de 1.º de Mayo de 1855.
(4) Circular de la Direccion de propiedades y derechos del Estado de 19 de Julio de 1862.
(5) Real órden de Hacienda de 6 de Noviembre de 1855, circulada por Gobernacion en 21 del mismo mes.

SECCION IV.

RÉGIMEN, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES COMUNES.

Todo lo relativo al régimen, cuidado y conservacion de estos bienes ha estado siempre á cargo de las corporaciones municipales, como administradoras y guardadoras de los intereses del municipio, con mas ó menos restriccion, segun las ideas que han dominado sobre las atribuciones, que deben tener estos cuerpos, y con sujecion á las ordenanzas establecidas para ello en cada pueblo. En lo antiguo estaba encargada á los corregidores y justicias la vigilancia sobre el cumplimiento de dichas ordenanzas, y promover su reforma, cuando lo estimasen conveniente para la mas justa y equitativa distribucion de ese beneficio y la paz y buena armonía entre los vecinos (2); así como en el dia tienen ese encargo las autoridades de los pueblos en el órden gubernativo.

Segun el art. 76 de la ley de ayuntamientos de 8 de Enero de 1845, reformada en 21 de Octubre de 1866, cuya reforma no versó sobre el punto de que tratamos, correspondia á los alcaldes, como administradores de los pueblos, bajo la vigilancia de la administracion superior, «procurar la conservacion de las fincas pertenecientes al comun;» y por el art. 82 se declaró, que era atribucion de los ayuntamientos arreglar por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y reglamentos, «el disfrute de los pastos, aguas, y demás aprovechamientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado com-

(1) Real órden de 14 de Enero de 1864.
(2) Leyes del tít. 3.º, libro 7.º de la Novísima Recop.

petentemente.» Estos acuerdos eran ejecutorios, si bien el gobernador civil podia de oficio, ó á instancia de parte, acordar su suspension si los hallare contrarios á las leyes, reglamentos ó Reales órdenes, dictando en su conformidad, y oido préviamente el consejo provincial, las providencias oportunas.

Consignado en la nueva Constitucion democrática de 1869 el principio de que «la gestion de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente á los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo á las leyes,» á cuyo principio se ajustarian estas, dando intervencion al Gobierno solamente para impedir estralimitaciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes (arts. 37 y 99), era consiguiente que se modificara el anterior sistema, para ponerlo en armonía con el nuevo órden de cosas, y así se ha hecho por la reciente *ley municipal* de 20 de Agosto de 1870.

Esta ley, despues de consignar en su artículo 67, que es de la *esclusiva competencia* de los ayuntamientos todo lo que tenga relacion, entre otras cosas, con la «administracion municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservacion de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al municipio;» y en el 68, que es *obligacion* de los mismos ayuntamientos procurar por sí ó con los asociados, en los términos que se espresará, el exacto cumplimiento de lo que se refiere á la «administracion, custodia y conservacion de todas las fincas, bienes y derechos del pueblo;» en cuanto al aprovechamiento de los bienes comunes ordena lo siguiente:

«Art. 70. Es atribucion de los ayuntamientos arreglar para cada año el modo de division, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales del pueblo, con sujecion á las siguientes reglas:

1.ª Cuando los bienes comunales no se presten á ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los vecinos del pueblo, el disfrute y aprovechamiento será adjudicado en pública licitacion entre los mismos vecinos esclusivamente, prévias las tasaciones necesarias y la division en lotes, si á ello hubiere lugar.

2.ª Si los bienes fueren susceptibles de utilizacion general, el ayuntamiento verificará la distribucion de los productos entre todos los vecinos, formando al efecto divisiones ó lotes, que adjudicará á cada uno con arreglo á cualquiera de las tres bases siguientes:

Por familias ó vecinos.

Por personas ó habitantes.

Por la cuota de repartimiento, si lo hubiere.

3.ª La distribucion por vecinos se hará con estricta igualdad entre cada uno de ellos, sea cual fuere el número de individuos de que conste su familia, ó que vivan en su compañía y bajo su dependencia.

La distribucion por personas se hará adjudicando á cada vecino la parte que le corresponda en proporcion al número de habitantes residentes, de que conste su casa ó familia.

La distribucion por la cuota de repartimiento se verificará entre los vecinos sujetos á su pago, adjudicando á cada uno la parte que en proporcion á la cuota repartida le corresponda. En este caso se adjudicará á los vecinos pobres esceptuados del pago una porcion que no esceda de la que corresponda al contribuyente por cuota más baja.

4.ª En casos estraordinarios, y cuando las atenciones del pueblo así lo exijan, puede el ayuntamiento acordar la subasta entre vecinos de los aprovechamientos comunales propiamente dichos, ó fijar el precio que cada uno ha de satisfacer por el lote que le haya sido adjudicado.»

Los alcaldes, segun el art. 107 de la misma ley, no tienen otra atribucion sobre esta materia, que la de publicar y ejecutar los acuerdos del ayuntamiento, dictando al efecto los bandos y las disposiciones convenientes.

Y conforme á los artículos 77, 161 y 162, estos acuerdos son inmediatamente ejecutivos, salvos los recursos que procedan, y no pueden suspenderse, aun cuando por ellos y en su forma se infrinja alguna disposicion

legal. En este caso se concede recurso de alzada para ante la comision provincial, que se compone de cinco vocales elegidos de su seno por la diputacion provincial, á cualquiera que se crea perjudicado por la ejecucion del acuerdo. Además, el que se crea perjudicado en sus derechos civiles puede reclamar contra tales acuerdos, haya sido ó no suspendida su ejecucion, mediante demanda ante juez ó tribunal competente, esto es, ante el ordinario ó el contencioso-administrativo, segun la naturaleza del asunto. Esta demanda ha de presentarse dentro de 30 dias, despues de notificado el acuerdo, ó comunicada la suspension en su caso.

En cuanto á *montes*, previene el art. 78, que «los ayuntamientos establecerán las reglas para el disfrute y aprovechamiento de los montes municipales; y sometido el acuerdo á la comision provincial, regirá en lo sucesivo sin necesidad de nueva aprobacion. Esta solo será necesaria cuando se trate de modificar ó alterar el régimen anterior, ó cuando se formulen protestas por infraccion de las reglas establecidas. En este caso, si el acuerdo fuere anulado, el alcalde y los concejales son personalmente responsables por los perjuicios que su ejecucion haya irrogado.» Y segun el art. 79, necesitan la aprobacion de la comision provincial para ser ejecutivos los acuerdos que se refieran á podas y cortas en dichos montes.

Puede suceder que un pueblo, que haya sido agregado á otro para formar con él término municipal, tenga territorio propio, con bienes de aprovechamiento comun que le sean peculiares. Los pueblos que se hallan en este caso conservan sus derechos y su administracion particular, desempeñada esta por una junta elegida por los vecinos, en la forma que se determina en los arts. 85 á 91 de la propia ley. Tambien pueden dos ó más pueblos formar comunidad, ó conservar la que ya tengan para el aprovechamiento de bienes comunes á los mismos: estas comunidades se regirán por una junta compuesta de un delegado por cada ayuntamiento, como se previene en el art. 75, y como ya de antiguo se practicaba en algun alfóz ó comarca.

Contiene, además, la citada ley municipal una disposicion importante, que determina en general los derechos de los vecinos sobre los bienes de que tratamos. Es la del art. 25, que dice así: «Todos los vecinos tienen participacion en los aprovechamientos comunales y en los derechos y beneficios concedidos al pueblo, así como están sujetos á las cargas de todo género que para los servicios municipales y provinciales se impongan, en la forma y proporcion que esta ley determina. Los vecinos adquieren el pleno dominio de la parte que en los aprovechamientos comunes les haya sido adjudicada; pero no entrarán en su disfrute, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 70 (1), sino en cuanto acrediten estar al corriente en el pago de todas sus obligaciones con el presupuesto municipal.» Y segun el art. 11, «es vecino todo español emancipado, que reside habitualmente en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padron del pueblo.»

Tales son las disposiciones de la nueva ley municipal, que tienen relacion con el uso y aprovechamiento de los bienes comunes de los pueblos. Las más importantes son las de los arts. 23 y 70. Por aquel se confirma lo que desde inmemorial venia establecido: solo los que tienen el carácter legal de vecinos de un pueblo, y que sufren por tanto las cargas del mismo, pueden gozar del beneficio de los aprovechamientos comunes. Pero ahora se establece una restriccion, no consignada en leyes anteriores, cuya justicia es notoria; tal es, la de no poder disfrutar de este beneficio el vecino que no esté al corriente en el pago de todas sus obligaciones con el presupuesto municipal: si no cubre las cargas de vecino, justo es que no participe de los beneficios de la vecindad.

Contiene, además, el mismo artículo 25 otra delaracion de suma gravedad y trascen-

(1) Creemos que esta referencia ha de estar equivocada: deberá ser á la regla 4.ª del art. 70, que se ha insertado anteriormente, la cual trata del caso en que ha de pagarse precio por el aprovechamiento de los bienes comunes, y entonces será procedente y justa la escepcion que aquí se establece; pero no en los demás casos del mismo artículo.

dencia. Dice que «*los vecinos adquieren el* PLENO DOMINIO *de la parte que en los aprovechamientos comunes les haya sido adjudicada.*» Téngase presente que, segun el 70, esta adjudicacion por punto general ha de hacerse por lotes. La idea de *dominio pleno* es inherente á la de propiedad libre y absoluta, con derecho á disponer de la cosa *inter-vivos* y *mortis causa*, percibir sus productos y escluir de su uso á los demás. ¿Tendrá este derecho cada vecino en la porcion ó lote que le haya sido adjudicada? Si así fuese, como lo apoya la letra del art. 25, habria que convenir en que han concluido los bienes comunes, que la ley desamortizadora de 1855 reservó para el aprovechamiento comun de los pueblos, esceptuándolos de la venta. Los pueblos perderian la propiedad colectiva de los mismos, toda vez que, hecha la distribucion y adjudicacion á los vecinos, pasarian á ser de la propiedad individual de estos, que, en tal supuesto, la conservarán, aunque dejen de ser vecinos, y podrán trasmitirla por venta ó de otro modo á los que no lo sean. ¿Puede haber sido esta la intencion del legislador?

Por mas que las ideas que hoy dominan en la gobernacion del Estado tiendan á la desamortizacion mas absoluta, no creemos que esa haya sido la intencion del legislador: no podemos persuadirnos de que por ese medio indirecto haya querido llegarse hasta el repartimiento de los pocos bienes que se habian reservado para las necesidades mas precisas de los pueblos. El art. 70 de la propia ley rechaza tambien esa interpretacion. Segun el, además de que la distribucion ha de ser de los productos, la division, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales ha de arreglarse *para cada año*, y no para siempre, como tendria que serlo si se trasliriese á cada vecino el *pleno dominio* de la parte, que se le adjudique. Es de suponer, por tanto, que se han empleado con impropiedad estas palabras, queriendo espresar, no el pleno dominio de los terrenos; sino el de los aprovechamientos ó productos de los mismos, ó sea el pleno uso y disfrute de la porcion, que á cada vecino corresponda, conservando el pueblo la propiedad.

Tampoco nos parece acertada ni de fácil ejecucion la disposicion de dicho artículo 70, en cuanto determina la forma en que ha de verificarse el aprovechamiento de los bienes comunales. Sabido es que este punto estaba arreglado en cada pueblo, en virtud de ordenanzas ó reglamentos aprobados por la superioridad y sancionados por la costumbre, conforme á sus necesidades y á las condiciones y circuntancias de los bienes. Si estos eran de pastos, cado vecino podia llevar las caballerías ó animales que tuviere; si de monte, todos podian hacer la leña necesaria para su servicio; si tierras de pan llevar, se distribuian por suertes ó por hojas, y no bastando para todos los vecinos, estaba determinado el turno para que todos disfrutaran con igualdad; si una vereda ó abrevadero, todos podian servirse de ello como y cuando lo necesitaran. Cada localidad se acomodaba á sus necesidades, y se llenaban estas en lo posible sin disturbios ni desavenencias, pues si las hubo, quedaron arregladas, y con la práctica de tantos años cada vecino sabia la forma en que debia usar de su derecho.

Ahora se establecen reglas nuevas, tanto para el caso de que los bienes sean susceptibles de utilizacion general, como para el que no lo sean. No las repetimos porque ya queda copiado el artículo que las contiene. Se vé en ellas la equitativa tendencia de que la distribucion de los aprovechamientos se haga con estricta igualdad, y á este fin se ordena la formacion de lotes y su adjudicacion á cada vecino, en el caso de que los bienes sean susceptibles de utilizacion general. Pero la esperiencia demostrará, que esto será impracticable ó inconveniente en la mayor parte de los casos. Supongamos un terreno de pastos, y de tal estension que puede fraccionarse en tantas partes cuantos sean los vecinos: á unos será inútil su lote, porque no tendrá caballerías ni ganado para utilizarlo, y para los que las tengan será insuficiente; al paso que todos reunidos, y aprovechados los pastos en comun serán suficientes como lo han sido hasta ahora, para todas las necesidades del vecindario, aun en el caso, mas general y comun, de que la estension del terreno no permita

dicha division. Pudiéramos citar otros muchos casos, que conocerán prácticamente nuestros lectores, en que será imposible y hasta perjudicial á los vecinos la ejecucion de las reglas que la ley establece. Es de esperar que se salven estos inconvenientes en el reglamento que ha de publicarse para la ejecucion de la ley, dejando á los pueblos la libertad necesaria para que obren como más convenga á sus intereses.

Para el caso de que los bienes comunales no se presten á ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los vecinos, se previene en la regla 1.ª, que «el disfrute y aprovechamiento será adjudicado en *pública licitacion* entre los mismos vecinos esclusivamente, prévias las *tasaciones* necesarias y la division en lotes, si á ello hubiese lugar.» La pública licitacion supone precio, como lo indica tambien la tasacion; y si el aprovechamiento no es gratuito, y está además limitado al mejor postor, tales bienes perderán la naturaleza y carácter de comunales: no llenan el objeto con que han sido esceptuados de la desamortizacion, y lo lógico seria venderlos para convertir su valor en inscripciones intransferibles de la deuda, como se ha hecho con los bienes de propios y con los arbitrados.

Con prudente prevision se autoriza á los ayuntamientos, por la regla 4.ª del propio art. 70, para poder arbitrar recursos sobre los bienes comunes, subastando entre los vecinos los aprovechamientos comunales, ó fijando el precio ó la cuota que cada uno haya de satisfacer por su lote; y esto mismo podria hacerse cuando todos convengan en que sea en comun el aprovechamiento. En tales casos, como el aprovechamiento es por precio, tendrá lugar justamente la escepcion del art. 25 de no ser necesario acreditar estar al corriente en el pago de los impuestos municipales, como ya se ha dicho. Pero téngase presente que esa autorizacion solo se concede para *casos estraordinarios*, y cuando las atenciones del pueblo así lo exijan, como, por ejemplo, á consecuencia de una mala cosecha, para una obra de utilidad general, etc.; y de consiguiente, tales recursos no pueden establecerse con carácter permanente ó perpétuo, pues en este caso los bienes perderian el de comunes, y pasando á la clase de *arbitrados*, podrian ser vendidos como los de propios, segun se ha dicho en las secciones anteriores.

Indicaremos, por último, respecto del mismo art. 70, que aunque dice al principio, que es atribucion de los ayuntamientos arreglar *para cada año* el modo de division y aprovechamiento de los bienes comunales, no creemos limitada su facultad á un solo año. Podrán hacerlo para dos ó mas años, cuando así lo exijan las condiciones de los bienes, como venia practicándose. Supongamos que estos son de pan llevar, y que no tienen la estension necesaria para dar un lote á cada vecino: en tal caso, como en un año no puede prepararse bien la tierra, y pudiera ser además de mala cosecha, lo que se hacia generalmente era, conceder el aprovechamiento por cuatro ó seis años, turnando los vecinos hasta que todos participasen igualmente. Lo propio podrá hacerse en el dia, á nuestro juicio: lo que manda la ley es que se haga el arreglo *para cada año*, lo cual no escluye el que comprenda un período de varios años, siempre que se determine lo que haya de hacerse en cada uno de ellos, para que al fin del período todos los vecinos hayan tenido igual participacion en el aprovechamiento.

Una duda podrá nacer de las disposiciones de la nueva ley municipal, que quedan espuestas. Sabido es que hasta ahora los vecinos no podian disponer de los aprovechamientos comunes sino para usos propios; así es que no podian enajenar, arrendar ni ceder de otro modo la parte de que cada uno podia utilizarse. ¿Podrán hacer esto en el dia? Por mas que se oponga á la naturaleza de ese derecho, tal como hasta ahora estaba definido, creemos que pueden hacerlo, segun el tenor literal del citado art. 25 de dicha ley. En él se declara, como ya hemos dicho, que «los vecinos adquieren el *pleno dominio* de la parte que en los aprovechamientos comunes les haya sido adjudicada.» No pudiendo ser este pleno dominio respecto de los terrenos, segun hemos demostrado, ha de referirse á los aprovechamientos, y la consecuencia indeclinable del pleno dominio es la facultad de

disponer libre y absolutamente de la cosa. De consiguiente, cada vecino podrá arrendar, enajenar ó ceder como á bien tenga, los aprovechamientos que le correspondan de la parte, lote ó porcion del terreno comunal, que le haya sido adjudicada en virtud de lo que se ordena en el art. 70 de la propia ley.

Es de notar, que siendo de tanto interés para los vecinos la distribucion de los aprovechamientos comunes, no se haya dado espresamente intervencion en ella á la junta municipal, creada por la nueva ley, compuesta de todos los concejales y de una asamblea de vocales asociados en número igual al triplo de aquellos. Sin embargo, como segun el artículo 50, corresponde á dicha junta «la aprobacion de los presupuestos de gastos y de ingresos, y el establecimiento y creacion de arbitrios,» tendrá que intervenir necesariamente para aprobar el acuerdo del ayuntamiento, aun en el caso de que por el indicado aprovechamiento no haya de exigirse retribucion alguna. Confírmalo la circunstancia de tener que figurar estos arbitrios y aprovechamientos, en el presupuesto municipal. Segun el párrafo último del artículo 127 de la propia ley, «el valor de los aprovechamientos comunales enajenados ó distribuidos entre los vecinos, será incluido en los presupuestos municipales de ingresos, y figurarán como data en los de gastos el valor de los lotes adjudicados ó repartidos por título lucrativo.»

Resulta de lo espuesto, que por la ley municipal de 1870, lo propio que por las leyes y jurisprudencia anteriores, es de la competencia y atribucion de los ayuntamientos todo lo que se refiere al régimen conservacion y distribucion de los aprovechamientos comunes de su pueblo respectivo. De consiguiente, contra sus acuerdos sobre esta materia no pueden admitir interdictos los juzgados y tribunales (1), ni proceden otros recursos que los administrativos, ya indicados, y en su caso la vía contenciosa, hoy ante la Sala 1.ª de la Audiencia respectiva (1).

Corresponde por tanto á la Administracion conocer de las cuestiones que se promuevan sobre la posesion de los bienes comunales, cuando esta sea interrumpida por actos ó usurpaciones manifiestas y recientes, limitándose á mantener el estado posesorio; y á los tribunales de justicia, de las cuestiones sobre la propiedad y la posesion plenaria (2). Pero cuando la usurpacion no es reciente ni fácil de comprobar, no tiene la Administracion facultades para dictar providencias, aunque dirijidas á conservar los aprovechamientos comunes, con perjuicio de la antígua posesion en que se halla un tercero, y la cuestion entonces es de tribunales, procediendo en tal caso el interdicto contra la providencia administrativa (3). Y tampoco las tiene para hacer alteraciones en los derechos establecidos á favor del comun, pues de lo contrario vendria la Administracion á resolver cuestiones de derecho que están fuera de sus atribuciones (4).

Queda espuesto cuanto se refiere al régimen, conservacion y aprovechamiento de los terrenos comunales. Concluirémos indicando, que en ningun tiempo han podido enajenarse estos bienes sin autorizacion del Gobierno ó del funcionario delegado para ello. La ley de

(1) Art. 84 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1870, y Reales decretos, á consulta del Consejo de Estado, de 25 de Julio y 29 de Noviembre de 1868, decidiendo á favor de la administracion, una competencia entre el gobernador de Badajoz y el juez de Llerena, y otra entre el gobernador de Santander y el juez de Potes, y otras decisiones de la misma clase.

(1) Sent. de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de Just. de 16 de Noviembre de 1869.

(2) Reales decret.-sents. del Consejo de Estado de 16 de Febrero de 1867, 4 de Mayo de 1868, y otros.

(3) Decreto de 20 de Agosto de 1869, decidiendo á favor de la autoridad judicial una competencia entre el gobernador y el juez de Salamanca. En otra decision de competencia entre el gobernador de la Coruña y el juez de Ortigueira, de 24 de Julio de 1868, se consignó el considerando siguiente:

«5.ª Que la doctrina general en materia de aprovechamentos comunes es, que á la autoridad judicial corresponde la declaracion del derecho y la posesion en juicio plenario, y á la administrativa conservar el estado posesorio, y para ello corregir las usurpaciones recientes y fáciles de comprobar.»

(4) Real decreto de 2 de Mayo de 1868, decidiendo á favor de la autoridad judicial una competencia entre el gobernador de Santander y el juez de Potes.

Lorenzo Arrazola

ayuntamientos de 1845, reformada en 1866, por su art. 83, permitia á los ayuntamientos deliberar sobre este punto; pero debiendo comunicar el acuerdo al gobernador civil, sin cuya aprobacion, ó la del Gobierno en su caso, no podrian llevarlo á efecto. La nueva ley municipal de 1870 ha seguido el mismo principio: segun su art. 80, es necesaria la aprobacion del Gobierno, prévio informe de la comision provincial, para las enajenaciones y permutas de los bienes comunes de los pueblos, que acuerden los municipios; y lo propio habrá de entenderse para transigir sobre sus derechos.

En cuanto al derecho que los pueblos puedan tener sobre pastos y otros aprovechamientos comunes en terrenos de propiedad particular, véase **ACOTADO**, **ACOTAMIENTO**, **MONTES**, **PASTOS**.

COMUNEROS. Los que disfrutan de algun derecho en comun, ó *pro indiviso*, sea en propiedad, sea en posesion, sea en aprovechamiento ó usufructo. Dícense tambien los primeros *condueños* y *condóminos*.

Por esta razon son condueños los coherederos de una herencia que está *pro indiviso*. Véase **CONDUEÑOS**.

En sentido histórico-político los individuos de las llamadas *Comunidades de Castilla*. Véase este artículo.

COMUNICACION. (Del latin *communicatio*.) Etimológicamente es hacer comun á otros con nosotros un suceso ó concepto, que nos consta, y tambien un estado ó cualidad de que disfrutamos, y no aquel, á quien hacemos partícipe. Son numerosos los casos en que así ocurre; y sin embargo, hay que estar al uso, que no siempre autoriza la espresion; que por otra parte no nos incumbe, sino cuando entra en el órden oficial, y muy señaladamente en el judicial. Tiene lugar en estos casos, de palabra ó por escrito, y entre autoridades ó funcionarios públicos, y tambien de autoridades á particulares, y á la inversa.

En el órden judicial se notifican las providencias; se comunican las solicitudes y gestiones del contrario. En este órden la comunicacion tiene dos significaciones y aplicaciones, dignas de atencion: una es relativa á la adecuada instruccion del que litiga; la otra á su libertad personal. La primera espresa el conocimiento que se dá, y debe darse, á cada parte de lo que le conviene saber para uso de su derecho sobre lo que pide, propone, niega ó confiesa la otra. Se hace unas veces *comunicándole* los autos, que equivale á mandar se los entreguen para su instruccion, y deduccion de las pretensiones que le convengan; otras por traslado ó trasunto de lo que ha de comunicarse; si bien hoy la fórmula antigua de *traslado* se ha convertido de ordinario en comunicacion ó *entrega* de autos: otras, en fin, permitiéndole reconocer los autos en el oficio del actuario.

En lo criminal la comunicacion es parte y una de las formas de la publicidad del juicio; y por ello, porque se liga á la propia defensa, el sumario, que es reservado para el público, y tambien para el procesado, no lo es siempre para éste; y antes debe cerciorársele de cuanto los testigos, ó alguna parte ó correo deduce contra él, en cuanto conduzca á evidenciar el hecho é instruir al juzgado, como se verifica en los careos, y cuando sin perjuicio del juicio, ó del reo, no puede diferirse para el estado de plenario, en cuyo estado ya todo debe ser público, como lo exigen la causa pública y el santo derecho de propia defensa. Y así testualmente lo establece la ley. (Artículo 10 del Reglamento provisional para la administracion de justicia.)

La otra significacion es de órden diverso, como queda insinuado. Es peculiar del juicio criminal, y espresa el estado del reo, en que le es permitido hablar ó conferenciar libremente con cualesquier personas. La causa pública, aunque con justos miramientos y restricciones, exige, á veces, la privacion de esta libertad, que, si en el reo espresa un derecho natural, natural es tambien el derecho de propia defensa de la sociedad y de los particulares, que de otro modo no podrian esperar justicia, por no llegar á conocerse la verdad. El artículo 7 del Reglamento provisional espresa muy adecuadamente, ya el conflicto de derechos, ya el modo de conciliarlos. «A ninguna persona, tratada como reo, dice,

se la podrá mortificar con hierros..... ni tampoco tenerla en incomunicacion, como no sea con especial órden del juez respectivo, el cual no lo podrá mandar, sino cuando lo exijan la naturaleza de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea realmente necesario.» La incomunicacion no puede pasar de 20 dias. El tener á un preso privado indebidamente de comunicacion, es un delito, que el Código penal define y castiga.

Por las propias razones la incomunicacion puede ser necesaria y tener lugar en el órden administrativo, ó sea en el ejercicio de la policía administrativa y judicial. V. **INCOMUNICACION.**

Sobre la forma de las comunicaciones, que, en asuntos de justicia y oficiales, tengan que dirigirse entre sí los jueces, tribunales y demás autoridades, corporaciones y funcionarios públicos, véase **ACORDADA, CARTA-ÓRDEN, DESPACHO, EXHORTO, OFICIO, SUPLICATORIO**, etc.

COMUNIDAD. Del latin *communitas*. Siendo el sustantivo abstracto de *comun*, habria de espresar toda colectividad ó conjunto de cosas ó personas, sobre las que recayera alguna cualidad, fin ó propósito comun. Pero no es así, como luego esponemos; y antes la enunciacion se limita á pocos casos en el órden administrativo y jurídico, y en ello ha de estarse al uso, que á veces los marca aun por antonomasia, como sucede, por ejemplo, en *comunidad religiosa*.

Una cosa es cierta, y es que *comunidad* espresa siempre colectividad, de un modo ó de otro organizada, de personas, y de aquí la cuestion doctrinal del número de ellas, que se necesita para constituirla. Cítase en este punto la autoridad del jurisconsulto Marcelo, siguiendo á Neracio Prisco, segun los cuales son necesarias tres personas, por lo ménos. Pero en primer lugar, ambos jurisconsultos se limitan al derecho civil; y en segundo, no precisamente bajo la enunciativa *comunidad*; sino bajo las más genéricas de *colegio* y *universidad*. Como quiera que sea, hé aquí su sentencia. *Neratius Priscus tres personas existimat collegium: et hoc magis sequendum est.* (Ley 85, Digesto, *De verborum significatione.*)

Algo parece oponerse á estas sentencias y á esta ley, la opinion de Ulpiano, ley tambien del Digesto (7, tít. 4, lib. 3). *In decurionibus* dice, *vel aliis universitatibus, nihil refert utrum omnes idem mancant, an pars maneat, vel omnes immutati sint. Sed, si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire, et conveniri, cum jus omnium in unum reciderit, et stet nomen universitatis.*

Si hubiera de estarse al tenor literal de la ley, no solo no se necesitan tres, ni dos para constituir colectividad; sino que para ello basta una sola persona; *sed, si universitas ad unum redit... stat nomen universitatis.* Examinada, comparada, sin embargo, toda la ley parece que no habla de la constitucion de la colectividad; sino del modo de hacer efectivas sus obligaciones y derechos, cuando una vez constituida, por vicisitudes de la vida, se reduce á uno solo. Hay que decir más, y es que ni aun se concibe posible que uno solo constituya sociedad *á priori*.

Lo que sí fija la ley es la regla cardinal de derecho, que, salvo convencion en contrario, domina en toda comunidad, ó consociacion de intereses materiales, á saber: que en tal caso *lo que se debe á la colectividad, no se debe á cada uno*; *ni cada uno debe lo que debe la colectividad.*

No tiene duda, despues de todo, que en lo civil pueden constituir consociacion, sociedad, colectividad, dos solas personas, lo cual vemos con frecuencia; como ni tampoco que esta asociacion no admite en el uso el nombre de comunidad.

Mayor dificultad ofrece aun en lo canónico, en que las asociaciones no tienen por fin principal intereses materiales, y en que siempre es esencial, y entra por tanto la idea de autoridad: concepto que no se concibe, ni esplica bien, y hablando de constituir *á priori*, sin concurrir por lo ménos tres personas.

Pero tampoco en lo canónico llevan el nombre de comunidad todas las colectividades; y sí otros, aunque siempre resaltando, y habiendo que suponer, la idea *comunitiva*, como *colegio, compañía, cabildo, cuerpo* ó corporacion eclesiástica, etc.

Volvemos á repetir que el uso es el que autoriza y determina el nombre de *comunidad*, en lo civil, como en lo canónico; en lo administrativo, como en lo político; siendo regla segura en cada caso, sobre la convencion, y las constituciones, estar á la naturaleza y fines de la colectividad.

Sobre los principales casos en que el uso, y á veces la ley, autorizan el nombre de comunidad, véanse los artículos subsiguientes.

COMUNIDAD DE BIENES (ENTRE CÓNYUGES). Véase MATRIMONIO: SOCIEDAD CONYUGAL.

COMUNIDAD DE BIENES (ENTRE CONDUEÑOS). Véase CONDUEÑOS.

COMUNIDADES DE ARAGON. Asociaciones de considerable número de aldeas, sujetas, sin embargo, á una ciudad, como cabeza y asiento de la autoridad superior. Y porque estas asociaciones tenian cada una fondos, jurisdiccion, deberes y derechos comunes á las localidades así consociadas, se llamaban comunidades. Con este nombre se conocieron cuatro en Aragon: la comunidad de Albarracin, de Teruel, de Daroca, y de Calatayud. Los escritores aragoneses no concuerdan sobre el principio y objeto de la liga, si bien se sabe de alguna de ellas que ya existia en el sigo XII. ¿Fué el orígen el instinto de propia conservacion y defensa de las aldeas, contra la opresion, esperimentada, ó temida, de las ciudades, y de los grandes señoríos, constituidos con ocasion de la reconquista? ¿Fué un medio tuitivo de las ciudades? ¿Lo fué tuitivo y político de la Corona, como por donde quiera se constituian pueblos ó comunes de realengo, y de aquí luego los comunes, ó municipios, fomentados y organizados como elemento contrapuesto por la Corona á la prepotencia señorial? De todo tal vez hubo algo.

La organizacion administrativa y judicial de cada aldea y la del conjunto, era análega á la de aldeas de los *alfoces* y comunes de España: un *jurado*, ó regidor local, con jurisdiccion inferior en lo criminal, y autoridad administrativa, subordinada en todo lo demás á las cabezas ó metrópolis; y luego, vigorizado el poder de la Corona, y el de las Córtes, fueron entrando, como en general, en el régimen comun.

COMUNIDADES DE CASTILLA. En repetidas ocasiones, entre nosotros, un número mayor ó menor de pueblos se ha coligado para reclamar del poder supremo relevacion de gravámenes, ó concesion de derechos ó ventajas, que creian serles debidos. Buscaban en la coalicion la energía y eficacia para obtener con mayor facilidad; sin llegar, empero, á la rebelion. Estas coaliciones se denominaron *hermandades*. Véase su artículo. Cuando la reclamacion no se encaminaba al poder supremo, sino á otras autoridades, y muy principalmente para fines defensivos, solian llamarse *apellidos*, como en su artículo queda espuesto.

Hay una entre las primeras, que á todas se sobrepone, y que, aun cuando al principio estas ligas y movimientos se llamaron tambien *hermandades*, en la historia lleva el nombre de *Comunidades de Castilla*, objeto del presente artículo.

No nos incumbe tratar de ellas históricamente; pero sí, como de un hecho notable, en sus motivos y tendencias en el órden político, jurídico, legislativo, y administrativo; connotados, que, por otra parte, apenas pueden, ó no pueden de ninguna manera, separarse omnímodamente de lo histórico del hecho, por lo que, no es posible evitar alguna digresion.

Sabido es que al magnífico reinado de los Reyes Católicos sucedieron diez y seis años de lamentables incidencias, que prepararon inquietud y malestar, á que luego se siguieron las Comunidades de Castilla, con su catástrofe de Villalar, y ulteriores consecuencias.

Muerta, en efecto, Isabel la Católica en 1504, ordenando en su testamento que, si su hija Doña Juana, llamada despues *la loca*, casada con el Archiduque de Austria, Felipe el *Hermoso*, y que á la sazon se hallaban en Bélgica, no volviese á España, gobernase el reino, entre tanto, su marido, el Rey Católico. Pero este, en el mismo dia del fallecimiento de la Reina Isabel, haciendo levantar

un gran tablado en la plaza de Medina del Campo, y constituido en él, declaró solemnemente que dejaba de ser Rey de Castilla, haciendo que los heraldos proclamasen por tales á Doña Juana, su hija, y al marido de ésta, el Archiduque.

Tardó éste en venir á España con la Reina año y medio, no habiendo llegado á ser reconocido, pues á los escasos cinco meses, falleció en Búrgos, de una sofocacion, como es sabido, en el juego de pelota, y cuando habia ido con la Reina para ser proclamados por las Córtes de aquella ciudad.

Doña Juana, que ya en Flandes habia dado pruebas de su lamentable, y despues aumentada perturbacion intelectual, tuvo un lucido intérvalo, para ordenar al cardenal Cisneros y á los Grandes, se llamase para gobernar el reino, á su padre, que, despues de la declaracion de Medina, se habia retirado á Nápoles.

Vino en efecto el Rey Católico, y gobernó la monarquía, auxiliado por el cardenal Cisneros, hasta su fallecimiento, verificado en 1516, al que pronto se seguiria, para mal del reino, el del propio cardenal.

El lamentable estado de la Reina Doña Juana hizo, como es notorio, que luego, por el cardenal y por los grandes se proclamase Rey de Castilla, en union de su madre, á Cárlos, su hijo mayor, que contaba á la sazon diez y seis años, y era ya Rey de Flandes.

Aceptó D. Cárlos, y mandó poderes al cardenal Jimenez de Cisneros para gobernar el reino, hasta que pudiera venir á España, como lo verificó á fines de 1517. En marcha ya para el interior del reino, citó al cardenal para recibirlo, en Mojados, camino de Medina; pero estaba sin duda dispuesto que no lo veria; y que ni recibiria las manifestaciones é instrucciones, que tanto le hubieran convenido, y que tanto hizo por retardar el ministro y favorito Xebres, que, con otros flamencos, venian con el Rey Cárlos; y el insigne prelado murió en Roa, con las circunstancias lamentables, y aun criminales, que narra su historia.

Los flamencos quedaron así dueños del poder, que empezaron á esplotar, teniendo mas cuenta de sí mismos que de España. El favorito Xebres obtuvo la mitra de Toledo para su sobrino, niño de diez años de edad, dando tan digno sucesor al célebre cardenal Cisneros, como si en ello hubiese querido ostentar de un modo irritante su poder, y herir la dignidad, y el amor propio, ya ofendido, de los españoles.

Así, no es estraño que Toledo fuera la primera, ó una entre las primeras ciudades, que prepararon la queja al Soberano, iniciando de este modo la liga y formacion de las comunidades, que, antes de dos años, serian un hecho armado y una catástrofe.

Pero el remedio se retardaba, y las causas del descontento debian ir por ello mismo en aumento, contribuyendo á su agravacion hasta un suceso, próspero al parecer, y fué, que, muerto el Emperador Maximiliano de Alemania, la Dieta general proclamó Emperador á Cárlos, I de España y V de Austria.

Sintió el Soberano la necesidad de pasar á recibir la nueva investidura, dejando el reino, por tanto, aun antes de conocerlo, y pidiendo para ello *derramas*, que con la ausencia, que se veia inevitable, del Monarca, hubieran puesto el colmo á la exasperacion general, si este último estremo no hubiera estado reservado á la realizada marcha del Rey, y á la violenta y como coactiva traslacion de las Córtes de Castilla á Santiago, y luego á la Coruña, obteniendo así las derramas, que unos procuradores tuvieron la presencia de ánimo de negar, y los más concedieron, siendo luego mal tratados, y algunos de ellos arrastrados en sus ciudades, como aconteció al de Segovia. Así se prepararon, y así llegaron las cosas al levantamiento armado de 1520.

Es de notar que, si bien al cardenal Cisneros se le dió por co-regente, hasta la venida del Rey, al abad de Lobaina, Pontífice despues con el nombre de Adriano VI, la bondad y debilidad de carácter del mismo embarazaba poco al cardenal; pero murió éste, segun queda indicado, en fines de 1517, y así el reino quedó á merced de los flamencos, durante el trienio, que dió lugar á los alzamientos.

La mejor esposicion de las quejas, serán

las quejas mismas: quejas, y peticiones de órden judicial algunas, de órden político otras, hasta ser reputadas, por algunos, como una nueva Constitucion del Estado. Es esa la parte propia de la Enciclopedia, y vamos á presentarlas por su órden, empezando por las que lo fueron en las Córtes de Valladolid de 1518, primeras que se celebraban en aquel reinado, y que tenian por objeto principal la jura del Monarca.

Ochenta y ocho fueron las peticiones presentadas, aunque solo nos fijaremos en las más notables, á saber, por su órden:

4.ª Que se confirmasen las leyes, pragmáticas, libertades y franquezas del reino, y jurase el Rey no consentir la imposicion de nuevos tributos.

5.ª Que no se diesen á los estranjeros, oficios, beneficios, dignidades, gobiernos, ni cartas de naturaleza, revocándose las que hasta entonces se hubiesen dado.

6.ª Que fuesen naturales de estos reinos los embajadores de ellos.

7.ª Que solo hiciesen servicio en la casa real, los españoles, como se hacia en los tiempos anteriores.....

9.ª Que no se enagenase cosa alguna de la Corona y Patrimonio real.....

16. Que no se permitiese extraer del reino, oro, plata, ni moneda.....

18. Que no se permitiese extraer caballos.....

48. Que el Rey tuviese consulta ordinaria para el despacho de los negocios, dando audiencia, á lo menos un dia por semana.....

68. Que se levantasen las nuevas imposiciones establecidas.

Tales fueron las principales peticiones de estas Córtes, algunas de las cuales se renovaron dos años despues, al terminarse las de la Coruña de 1520, no obstante ser sus procuradores los mismos, que acababan de votar el subsidio para el viaje del monarca.

En una larga representacion que le hicieron luego los procuradores de estas últimas Córtes, antes de su partida, le pedian que regresase pronto á España; que no llevase á efecto la exaccion del servicio, que le habian votado; que fuesen españoles los Gobernadores, que dejase en su ausencia; y que se labrara moneda baja de ley, para quitar el incentivo á su estraccion.

Sabido es además que, ni en estas Córtes de la Coruña se quiso otorgar el servicio de maravedís, sin que antes viera y respondiera el Monarca á las instrucciones, capítulos y memoriales que le llevaban, sobre cosas concernientes al buen servicio de la Religion y del Estado; y es sabido que en las de Valladolid no se le quiso jurar por Rey, sin que antes él jurase á su vez, no solo guardar y mantener los usos, fueros y libertades de Castilla; sino tambien no dar empleos, ni oficios, á estranjeros; lo cual dió lugar á acaloradas contestaciones y á aquella respuesta de «*esto juro*,» que en tono desabrido y un tanto alterado pronunció el Monarca, viéndose apremiado por las exigencias del doctor Zumel, procurador de Toledo.

Al fin se anunció la marcha, no tan pronto esperada, del Soberano, aumentándose la inquietud general del país, porque con ella, no solo quedaba por completo á merced de aquellos cortesanos, y privado de toda influencia verdaderamente nacional, que pudiera inclinar el régimen estranjero en el sentido que deseaban los pueblos; sino que se ausentaban tambien de España algunos grandes dignatarios, y otros no tenian así necesidad de mantener el boato y la gente, á que les obligaba la presencia del Rey, todo lo cual redundaba en daño de los particulares. Así lo hizo presente al Sr. D. Cárlos la villa de Madrid, en una representacion que le dirigió, en 16 de Marzo de 1820, con motivo de haberle escrito el Rey, desde Villalpando, en 7 del propio mes, que enmendase y reformase los poderes de sus procuradores, que no reputaba en regla.

Crecia el descontento, y aumentaba, segun se creia inevitable, y mas próxima la vuelta del Rey para Austria. Estendíanse ya las quejas aun contra algunos grandes y otros naturales, inclinados, ó poco opuestos, á la córte, y empezaron á entenderse y esplicar su aumentada inquietud las poblaciones y notables ciudades, como Toledo, Avila, Segovia, Zamora, Salamanca, Medina del Campo, la Co-

ruña y mas tarde Búrgos. Toledo invitó á las demás á nombrar representantes, que se reuniesen en Avila, formando allí la que habia de llamarse *la Santa Junta*. «En aquella »Santa Junta, decia Toledo, no se ha de tra»tar sino del servicio dé Dios. Lo primero, la »fidelidad del Rey nuestro Señor: lo segundo, »la paz del reino: lo tercero, el remedio del »patrimonio real: lo cuarto, los agravios he»chos á los naturales: lo quinto, los desafue»ros que han hecho los extranjeros: lo sesto, »las tramas que han intentado algunos de los »nuestros: lo séptimo, las imposiciones y car»gas intolerables que han padecido estos rei»nos. De manera que para destruir estos sie»te pecados de España, se inventasen otros »siete remedios en aquella Santa Junta...»

Marchó, al fin, el Monarca: puede decirse que estalló la borrasca; y la Santa Junta, y las ciudades elevaron al Rey, como el último desesperado grito de remedio, la peticion, por demás notable, que aunque estractada, presentamos en su misma forma, y que no sin razon, algunos han denominado *proyecto de Constitucion*; á saber:

Personas reales. Pide la Junta que el Rey vuelva pronto á residir en sus reinos, para que desde ellos se enseñorce del mando, como lo hicieron sus antepasados, y que para asegurar la sucesion á la Corona, se case á satisfaccion de sus reinos.

Casa real. Que cuando el Rey vuelva, no traiga consigo flamencos, ni franceses, ni gente de otra nacion para darles oficio de palacio, ni gente de armas para guardar su persona; que se moderen los gastos de la mesa de palacio; que no se den salarios en él á quienes no presten servicios efectivos; y que ningun Grande pueda tener oficio en la hacienda y patrimonio real.

Procuradores de Córtes. Servicios. Que no se cobre el servicio votado en las Córtes de la Coruña. Que cuando se elijan procuradores á Córtes, cada uno de los tres estados nombre el suyo: que la ciudad le pague sus dietas: que los Reyes no señalen la forma, en que las ciudades han de dar los poderes: que las Córtes tengan libertad de reunirse, como quisieren, y no se les ponga presidente: que los procuradores no puedan recibir merced alguna del Rey, mientras lo fuesen, *pena de muerte*: que las ciudades, que tienen voto en Córtes, se puedan reunir cada tres años, sin ser convocadas.

Moneda. Plata. Vellon. En estos tres capítulos se pide: que no se pueda sacar de estos reinos oro ni plata labrada, ni por labrar, pues está prohibido bajo *pena de muerte*: que se labre moneda de mas baja ley, como las coronas del Sol de Francia, para evitar la estraccion: que seis meses despues, se prohiba la circulacion de la moneda estranjera.

Consejo, Audiencias y Justicias. Que separe el Rey los consejeros, que habian servido hasta entonces, inhabilitándolos para serlo en lo sucesivo, y nombrando para dichos cargos á naturales de estos reinos. Que el Presidente, Consejo, oidores, alcaldes y oficiales de las Audiencias y Chancillerías sean visitados de tres en tres años, castigándose á aquellos, en quienes se encuentre culpa. Que no se den estos empleos por favor, ni á virtud de peticion; sino por aptitud y merecimiento: que no se confieran á los recien salidos de los estudios; sino á hombres de esperiencia en el ejercicio de la profesion: que las revisiones de las sentencias en el Consejo Real, Audiencia y Chancillerías no se hagan por los mismos magistrados, que dieron la sentencia: que los cargos de justicia sean amovibles: que no se puedan dar á estranjeros: que los pleitos se vean por el órden que tienen en la tabla: que no retenga el Consejo los que corresponden á las Audiencias: que no se pueda tener mas de un oficio de esta clase: que haya apelacion de las sentencias de muerte: que se residencie á los alcaldes, cuando dejen las varas. Se formulan otra porcion de peticiones, relativas á la percepcion de derechos.

Bulas de Cruzada y composicion. Que no se consienta predicar en estos reinos bulas de cruzada, ni de composicion, sino con causa verdadera y necesaria, vista y determinada en Córtes, y por los párrocos ó sus tenientes: que se amoneste, pero no se obligue á tomarlas, ni se cobren por vía de excomunion ó en-

tredicho: que el importe se gaste en lo que está mandado, y no se haga de él merced á persona alguna, por el daño que sufren las rentas, y porque no se ganarán las indulgencias que conceden las bulas, con perjuicio de las ánimas.

Mercedes. Que no se hagan á los jueces de bienes confiscados, ó que hayan de confiscarse, á personas, á quienes ellos han de juzgar: que no se hagan tampoco de bienes, sobre los cuales haya pleito pendiente: que se revoquen todas las de villas, lugares, términos y jurisdiccion, cartas de hidalguía y ejecutorias, que se hayan hecho despues de la muerte de Doña Isabel la Católica; y las de oficios, beneficios y dignidades en la espectativa de las vacantes: que no se den, ni se vendan oficios de la Real Casa, y de justicia, dándose por vacantes los así proveidos.

Residencias. Que se les tome á todos los que han administrado la hacienda real, desde el tiempo de D. Fernando el Católico, ante personas nombradas por el Rey, y el reino; y lo mismo á los que han tenido á su cargo las cruzadas, bulas y composiciones, y á los del Consejo y oficiales de la Córte y Casa del Rey, que hayan de ser separados de sus empleos.

Prelados. Que los obispados, arzobispados, dignidades, canongías y otros beneficios, se provean en naturales de estos reinos, y no en estranjeros: que se haga nueva provision para el arzobispado de Toledo, pues el nombrado Mr. Xevres, es menor de edad, está ausente y es estranjero: que se revoquen las cartas de naturaleza, dadas hasta entonces, y no se den mas en lo sucesivo: que los prelados residan en su diócesis la mayor parte del año: que se revoque un *breve*, en cuya virtud se autorizaba á los clérigos para entender en ciertas causas criminales contra seglares.

Contribucion. Que los señores pecháran y contribuyeran en los repartimientos y cargas vecinales, como cualquiera otro vecino.

Generales. Que se llevara á efecto todo lo que el Rey habia otorgado en las Córtes de Valladolid y de la Coruña: que se procediese rigorosamente contra Antonio Fonseca, el licenciado Gutierre Quijada, y el licenciado Suarez, y los demás que tomaron parte en la quema y destruccion de Medina del Campo. Por último, las comunidades piden un decreto de aprobacion general para todo cuanto habian hecho, gastado y dispuesto en aquel tiempo.

Aunque de menor importancia, tocáronse aun otros muchos pormenores, bajo los epígrafes, *sacas de pan, ganado, cueros y lanas*: *Indias, islas y tierra firme*: *regidores*: *enajenacion de bienes de la Corona*: *fortalezas*: *alcaidías*: *paños* (1).

Sobre lo fundado de los agravios, si la historia no lo evidenciara de tantos modos, resultaria demostrado por paladina confesion de los mismos gobernantes, nombrados por el Rey, en su ausencia, y cuando ya se habia trabado la lucha armada. Escribiendo el cardenal Adriano y los del Consejo al Emperador en 12 de Setiembre de aquel año, sobre lamentables disturbios, que presenciaban, le decian: «De tantos y tan grandes escánda»los, quienes hayan sido los que los han cau»sado y los que de hecho los han levantado, »no queremos nosotros decirlo, sino que lo »juzgue aquel que es juez verdadero. Pero »en este caso suplicamos á V. M. tome me»jor consejo para poner remedio, que no to»mó para escusar el daño. *Porque si las co»sas se gobernaran conforme á la condicion »del reino, no estaria como hoy está, en tan»to peligro.*» (Sandoval, *Historia de Cárlos V*, lib. 6, pág. 270.)

No es menos evidente que el Rey, traida ya la cuestion al terreno de la fuerza, queria sinceramente remediar los males que reconocia. Encaminado á este fin, y atendiendo á reforzar su autoridad, nombró, como es sabido, dos corregidores más: Hurtado de Men-

(1) En esto las fuerzas imperiales, y las comunidades armadas en hueste, se observaban hostilmente, siendo el centro de las primeras con los Regentes y el Almirante de Castilla, Valladolid; el de las segundas, sucesivamente Castromocho, Rioseco, Villabrájima, Tordehumos, Tordesillas, Medina del Campo, entregada al fin al incendio por los imperiales, mandados por Fonseca y el alcalde Ronquillo, que conservaba encerrado en la fortaleza de Fermoselle al comunero D. Antonio de Acuña, obispo Zamora.

doza y Velasco, españoles y de la clase de la grandeza. Entre otras prevenciones importantes, les decia en sus instrucciones, y dando encargo de ello al almirante D. Fadrique Enriquez:

«Asimismo le direis (al cardenal) que si »para bien de aquellos reinos y buena paz y »sosiego y administracion de la justicia de »ellos, hay otra cosa que á él le parezca que »debemos mandar, proveer, ó en lo proveido »acrecentar, ó *que mudemos de lo que hasta »aquí llevamos proveido y al presente vos lle»rais*, que luego nos avise de ello, porque lo »mandemos proveer (1).»

Como confirmacion de esto, todavia el almirante D. Fadrique Enriquez decia á la Junta, exhortándola á que hiciere á los comuneros armados deponer las armas:

«Prometo, decia, en nombre del Rey, que »quitará el servicio que echó en la Coruña, »é de aqui adelante, cuando lo pecharen, se»rá con voto de las ciudades, ó por cosa que »manifiestamente vean que conviene é con »voluntad de ellas.....—Prometo que otorga»rá su alteza que ninguna dignidad, ni be»neficio, ni oficio, ni encomienda, ni tenen»cia, non pueda ser dada á extranjeros.— »Prometo que no se sacará ninguna moneda »de Castilla, é que para esto se dará toda la »órden é seguridad necesaria. — Prometo »que S. M. revocará todas las naturalezas, »que ha dado en el reino.—Prometo que »S. M. dará los corregimientos conforme á »las leyes del reino y no irá contra de ellas... »—Prometo que todos los oficios, que va»caren, serán proveidos en Castilla, é non »fuera del reino, é que asi será lo de las re»muneraciones.»

La índole de la lucha armada, sus trances, y el estado de los ánimos, dificultaba ya, tal vez, una solucion pronta y pacífica: acaso se precipitó y lo impidió todo el brusco y trágico desenlace de Villalar, y la historia cuenta, cómo alcanzados allí los comuneros por los imperiales, y trabada la lid, sucumbieron con su causa, quedando prisioneros, y en breve, ejecutados sus caudillos y jefes principales, Bravo, Padilla y Maldonado, dispersándose los no prisioneros, y buscando otros un asilo en Portugal.

Dicho se está que terminada así la lucha, perseguidos con el último rigor, y hasta el esterminio los coligados, que habian sobrevivido, no se haria la menor concesion á la liga; si bien la fuerza misma de los sucesos, el reconocimiento necesario de indudables errores, é injusticias, la contraposicion de intereses y daños, la disposicion y excitacion de los ánimos á novedades políticas, jurídicas y administrativas; el riesgo, que habian corrido hasta los derechos de la Corona, haria á esta más advertida para las novedades, y mejoras legislativas, que se fueron haciendo en el largo reinado de Cárlos V, con hondas y vivas reminiscencias, aun políticas, en tiempos y reinados posteriores, sin escluir los de D. Fernando VII y Doña Isabel II.

COMUNIDADES RELIGIOSAS. Vasta es la materia, si hubiéramos de esplanarla en toda su estension histórica, en cuanto á la Iglesia universal; en todas sus vicisitudes y pormenores cronológicos y de institucion, y segun la escelencia respectiva de institutos; segun el mayor bien, en fin, que hayan prestado á la religion, á la civilizacion y á la humanidad. Pero, aunque con indicaciones necesarias de generalidad, habremos de ceñir nuestra esposicion á España, en su mayor conexion con nuestro derecho público y disciplina canónica española, como es el fin de la ENCICLOPEDIA.

En rigor etimológico, son y pudieran llamarse comunidades religiosas, las numerosas corporaciones, que por el hecho de serlo, son ya comunidad; y por tener un fin comun, religioso ó eclesiástico, son comunidades religiosas.

La piedad entre nosotros, como en el mundo cristiano, ha esplicado y diversificado de tantos modos su fervor; la Iglesia como sociedad, con necesarias atenciones *ad-extra* en su union con el Estado, y siempre consultando el bien espiritual, ha estimado tantos modos de realizar sus fines, que seria interminable comprenderlos en un artículo, sin

(1) *Historia de las comunidades de Castilla*, por Maldonado, nota núm. 8, al fin de la obra.

contravenir al método de la ENCICLOPEDIA; y mayor inconveniente el reducirlos á un único género, y á una definicion comun.

Hay, sin embargo, enunciaciones tan generales, que lo parecen; y con todo la de *cuerpos ó corporaciones eclesiásticas*, por ejemplo, se aplica bien á las que en la Iglesia tienen su principal servicio *ad-extra*, como los cabildos catedrales y colegiales, seminarios, colegios de eclesiásticos, etc.; pero no á los que tienen votos perpétuos, ó vida puramente contemplativa; ni tampoco á las casas de religiosas. La de *Ordenes religiosas*, es bastante genérica tambien; pero no se aplica con exactitud á las corporaciones antes mencionadas; y sí á las corporaciones religiosas, que emiten votos y se rigen por una regla, aprobada por la Santa Sede, sin que siempre sea necesaria la vida comun. Hay corporaciones, por último, que tienen vida comun, votos perpétuos, y como causa de ellos, una regla aprobada por el Papa; y á estas el uso, aun por antonomasia, las ha denominado *Comunidades religiosas*: y son reuniones de hombres ó mujeres, consagradas, por toda su vida, al servicio divino, en vida comun, con clausura y votos perpétuos de castidad y obediencia, y algunas de pobreza, y conforme, en eso y en todo lo demás de su cualidad corporativa, á una regla aprobada por Su Santidad, y de que solo S. S. puede dispensarles.

La Santa Sede, en efecto, aunque raras veces, y por motivos muy graves, concede, á peticion de parte, secularizacion individual, en virtud de la que, el religioso ó religiosa que la obtiene, sale al siglo de nuevo, volviendo á vestir el traje seglar; aunque siempre interiormente el escapulario distintivo de la órden; y relevados de la clausura y vida comun; y de los votos de pobreza y obediencia, pero nunca del de castidad; salvo por vicios notorios de nulidad en la profesion ó emision de votos; si bien en este caso, no hay propiamente secularizacion; sino declaracion de nulidad de la profesion. En todo evento, se estará á los términos del breve pontificio, cometido de ordinario al diocesano.

A causa del fin, y de los votos, los reunidos en comunidad religiosa se llaman por antonomasia, *religiosos* y *religiosas*, y casas religiosas, las de su morada comun; y tambien *convento*, por haber sus individuos concurrido á reunirse, y *monasterio*, algunas, por especialidad de la regla, segun todo se esplica en sus artículos.

De estas comunidades, unas están, segun su regla, esclusivamente consagradas á la vida contemplativa; otras ejercen importantes servicios *ad-extra*, como la predicacion y confesion las de hombres, y la enseñanza de niñas las de mujeres. Novísimamente, por el concordato de 1851, se ordenó, como luego veremos, que las comunidades de religiosas hayan de emplearse en lo sucesivo, en la enseñanza, ó en servicios de humanidad y caridad, y que con esa prevencion entren en los conventos.

Las comunidades religiosas en Europa, y por tanto entre nosotros, se aumentaron prodigiosamente desde el siglo XIII, con la institucion de las Ordenes de San Francisco y Santo Domingo, ó sea de *mendicantes* y *predicadores*, y por el mismo espíritu religioso, tantos otros despues, diferenciándose entre sí, ya por el nombre de sus fundadores, como *benedictinos*, *bernardos*, *basilios*; por alguna circunstancia especial de su órden, como *predicadores*, *mendicantes*, *cartujos*; de sus reformas, como *recoletos*, *carmelitas calzados* y *carmelitas descalzos*; á causa de su fin de vida, contemplativa ó no, como *monges* y *frailes*, segun todo, con otros multiplicados pormenores, esplicaremos en su lugar.

En un principio, la piedad lo prevenia todo, y ni aun hacia recelar dificultades; y las comunidades é institutos religiosos, por parte de la autoridad política, se establecian libremente. Con el tiempo, motivos de regularidad y gobierno, sobre la aprobacion pontificia, y por lo comun, la del diocesano, fué necesaria la de la Corona; y á fines del siglo XVIII, llegó esta á serlo, aun para las nuevas cofradías.

Resfriado con los siglos el primitivo fervor, conturbada, como todos los órdenes, la vida interior con el movimiento mismo de la vida social, la autoridad fijó, como queda indicado, su atencion, y la opinion pública su cen-

sura, sobre las comunidades religiosas, ya en cuanto á su número, ya con mas ó menos intension, sobre relajacion en la regla.

Los Reyes Católicos no podian desconocer este medio, el mas eficaz de salvar las comunidades religiosas, y obtuvieron de la Santa Sede, para el cardenal Cisneros, la delegacion de visitador pontificio de las regulares de España y de Ultramar, con facultades de corregir. Sobre este punto, conduce tener presente el célebre Memorial de Riol.

El concilio de Trento despues, en su sesion 28, cap. 3.°, de *Regularibus*, estableció reglas prudentes sobre moderar el número de religiosos á los que cómodamente pudiera mantener cada convento con sus bienes y limosnas, estableciendo además terminantemente, que en lo sucesivo no se fundasen conventos ó estableciesen comunidades, sin licencia del diocesano: «*nec de cetero similia loca erigantur, sine episcopi, in cujus diœcesi erigenda sunt, licentia priùs obtenta.*»

Pero la fuerza de los sucesos en Europa, habia de inutilizar el concebido propósito de reformas graduales. Grandes perturbaciones religiosas por una parte, políticas otras, estensivas en su influjo á todos los órdenes sociales, agitaron el mundo, como la reforma de Lutero; y por su influjo, á la reforma gradual de las comunidades religiosas, se adelantó en general su ruina, en la forma de que dá razon la historia.

La revolucion inglesa fué pronto una nueva etapa en el camino emprendido. «*Quemad los nidos*, gritaba el heresiarca Juan Nox, *y volarán los pájaros*;» y el ejemplo respondió á la escitacion.

Si algun impulso faltaba, vendria á darlo despues, de un modo formidable, la revolucion francesa.

España con todo, continuaba inmoble, ya en su órden político, ya en el religioso, en medio del cataclismo universal. Pero el impulso estaba dado; el peligro se acercaba, y se pensó en quitar causas, y aun pretestos, á la revolucion social, eminentemente religiosa; y á este fin se encaminaban, en cuanto á comunidades religiosas, las multiplicadas disposiciones, que hoy comprenden, muy especialmente los títulos 26, 27 y 28, libro 1.° de la Nov. Recop.

El Consejo de Castilla, á su vez, esforzaba siempre su celo por la reforma de la disciplina, y son en ese punto por demás notables las consultas del mismo de 1619, 9 de Diciembre de 1677, 18 de Diciembre de 1678, y 13 de Agosto de 1691, que hoy forman, en parte, la ley 1.° del tít. 26 de los citados. En ella están reseñados los males, que se lamentaban, y el remedio, que se queria; y aun en uno solo de sus párrafos. El 22, hoy 1.° de la ley recopilada, decia: «Para el remedio de reformar y reprimir la relajacion, que se lamenta, en el estado religioso, en la consulta del año 1619, propuso el Consejo en general, se detuviese la mano en dar licencias para muchas fundaciones de conventos; y que convenia se suplicase á Su Santidad, se dignase poner límite á los conventos y al número de religiosos en ellos; y para evitar muchos inconvenientes, que se reconocen en la admision de religiosos, de menos edad de la que parece se debia, mandase Su Santidad no se pudiese dar el hábito á ninguna persona, menor de 18 años, ni las profesiones hasta 20 cumplidos.»

Poco despues, en 1723, apareció la notable Bula, *Apostolici Ministerii*, sobre reforma del clero secular y regular.

La reforma de Lutero habia dado ocasion, á que apareciese en la palestra la nueva institucion religiosa de la Compañía de Jesús, que en España fué suprimida por la pragmática de 2 de Abril de 1767 (ley 3.°, tít. 26, libro 7, Nov. Recop.); si bien es sabido, que esa supresion no tuvo por motivo, ni fin, la reforma de las órdenes regulares, en el concepto en que venimos enunciándola.

Por efecto, sin duda, de las consultas del Consejo en 10 de Febrero de 1802 y 15 de Mayo de 1804, vieron la luz pública las dos conocidas Bulas de Pio VII, por la primera de las cuales, recordando la delegacion pontificia, que se habia dado al cardenal Jimenez de Cisneros, se encomendaba la misma, y para los propios fines, al cardenal de Borbon, arzobispo de Toledo: y por la segunda, defiriendo al ruego de la Córte de España,

se accedia á que las comunidades de regulares fuesen regidas por vicarios generales, naturales de estos reinos, en vez de serlo por generales estranjeros.

Así lentamente, pero con perseverancia, se caminaba á la reforma; pero bien pronto no fué nada necesario, pues la invasion francesa, por decreto de 18 de Agosto de 1808, declaró suprimidas «todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, existentes en los dominios de España.»

Las Córtes de Cádiz, por decreto de 17 de Junio de 1812 (art. 7.°), ordenaron fuesen secuestrados, con aplicacion de los frutos en beneficio de la nacion, los bienes de cuerpos eclesiásticos ó religiosos, de ámbos sexos, disueltos, estinguidos ó reformados por resultas de la invasion francesa ó por providencias del Gobierno intruso, entendiéndose el secuestro, con calidad de reintegro de fincas y capitales, si dichas corporaciones fuesen restablecidas, y sin perjuicio de señalar alimentos á los indivíduos de ellas, que se habian refugiado en las provincias libres, observando su instituto.

La regencia del reino, por órdenes de 25 de Diciembre del propio año, 4, 14, 26 y 29 de Enero de 1813, restableció diferentes comunidades de las suprimidas por el Gobierno intruso. En su vista, las Córtes por decreto de 18 de Febrero de aquel año, ordenaron:

«1.° Que la reunion acordada por la regencia de las comunidades de Capuchinos y de San Antonio de Sevilla, de observantes Franciscanos, de Mercenarios descalzos y de Carmelitas descalzos de Andalucía, de Dominicos de Andalucía, Estremadura, Mancha y parte de Múrcia, de Carmelitas descalzos de la provincia titulada de San Juan de la Cruz, y de menores descalzos de la de San Diego, se lleve á efecto, con tal que no estén arruinados los conventos y sin permitirse por ahora que se pida limosna para reedificar estos edificios ó sus iglesias.

»2.° Que no se restablezcan ni subsistan restablecidos conventos que no tengan doce indivíduos profesos, á escepcion del que fuere único en un pueblo, en el cual deberá completar este número el prelado superior con religiosos de la misma órden.

»3.° Que en los pueblos, donde hubiese muchos conventos de un instituto, se restablezca uno solo, donde deban reunirse todos los de aquel pueblo.

»4.° Los indivíduos pertenecientes á las casas suprimidas, serán agregados á los de su órden, que se hayan restablecido ó restablezcan.

»5.° La regencia se abstendrá de espedir nuevas órdenes sobre restablecimiento de conventos, y los prelados de dar hábitos, hasta la resolucion del espediente general.

»6.° La entrega de los conventos é iglesias y de los muebles de su uso, se hará, así en las capitales como en los pueblos subalternos, por el intendente ó sus comisionados, por medio de escritura, que autorizará un escribano público, y deberán firmarla todos los regulares, que se reunan en su respectiva comunidad, de cuyo documento se librarán dos copias, una para la regencia y otra para las Córtes.

»7.° Y finalmente, si al recibo de este decreto se hubiese ya verificado el restablecimiento de alguna casa religiosa, en virtud de las providencias del Gobierno, y le faltasen alguna de las circunstancias en él prescritas, quedará sin efecto, debiendo arreglarse inmediatamente al tenor de estos artículos.»

Luego fueron restablecidos los regulares en 1814; suprimidos de nuevo los monacales, en la época constitucional de 1820 á 1823, y nuevamente restablecidos en 1824.

El presentimiento del peligro, y el convencimiento de la necesidad de la reforma, no solo ya en la disciplina, sino en el número; el constante propósito, en fin, de quitar ocasiones á la revolucion, dictó el Real decreto de 22 de Abril de 1834, nombrando una junta, compuesta de eclesiásticos seculares y regulares, y de personas legas, todas de acrisoladas circunstancias, encargando á la misma propusiera las reformas que creyese oportunas. Se la preceptuó, que en cuanto á regulares, atendiese, á que «los conventos mendicantes, por constitucion ó por regla, *guardasen la debida proporcion con las ver-*

daderas necesidades de las diócesis respectivas, para desempeñar *su cargo esencial* de auxiliares natos en ella;» y que los de monacales ofrezcan, segun su naturaleza, *en los puntos en que se estimen convenientes*, un asilo á la acendrada piedad y espíritu de abstraccion.»

Las restricciones y fines del Gobierno estaban bastante indicados, y sin duda la Junta los hubiera comprendido, de lo que dió buenas pruebas en la iniciacion de sus trabajos. Si las comunidades religiosas hubieran podido salvarse de algun modo, por este lo hubieran sido, ó por lo menos, se hubiera demorado la estincion. Pero el espíritu del siglo avigoraba su impulso, y como de un cuerpo electrizado, empezaban á desprenderse encendidos destellos, que enardecian los ánimos primero, para lanzarlos despues al último despecho.

La índole del movimiento habia cambiado, en efecto: en vez de reforma, se anunciaba la omnímoda estincion.

Sin esperar los resultados de los trabajos encomendados á la Junta, y con el fin, sin duda, de atenuar el impulso, por decreto de 4 de Julio de 1835, fué suprimida en España, aplicando sus bienes al crédito público, la institucion de los jesuitas, que habia sido restablecida por Real decreto de 29 de Mayo de 1815.

Pero la impaciencia rechazaba ya todo temperamento; y en Madrid y otros puntos, entrando en vias de fuerza, tumultuariamente allanadas las casas religiosas de varones, tuvieron lugar sucesos sangrientos, notorios, que seria de desear no tuviera que registrar nuestra historia.

No podia ya tardar, y no tardó en efecto, la estincion general; y por decreto de 8 de Marzo de 1836, reputándose autorizado para ello el Gobierno por ley de 16 de Enero de aquel año, que le facultaba indefinidamente para levantar recursos, que le pusieran en posicion de concluir la guerra civil, con amplitud casi omnímoda, se declararon suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad ó de instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos regulares y las de las cuatro Ordenes militares y San Juan de Jerusalen, existentes en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa. (Art. 1.°)

En la supresion de 1820 á 1823 se esceptuaron los mendicantes; en la presente, venian tambien comprendidos.

Se esceptuaron, sin embargo, los colegios de misioneros para las provincias de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo: los colegios de escolapios; y los conventos hospitalarios de San Juan de Dios, que se hallasen abiertos en la actualidad. (Art. 2.°)

(Art. 4.°) Quedan suprimidos desde luego, todos los beaterios, cuyo instituto no sea la hospitalidad ó la enseñanza primaria.

(Art. 5.°) Las Juntas, que se crean por este decreto, en las cabezas de todas las diócesis, reducirán el número de conventos de monjas, al que sea absolutamente indispensable, para contener con comodidad á las que quieran continuar en ellos, distribuyendo las de los suprimidos entre los demás de la misma órden que subsistan, arreglándose para la supresion á las bases siguientes:

1.ª No se conservará abierto ningun convento, que tenga menos de veinte religiosas profesas.

2.ª No se permitirán en una misma poblacion dos ó mas conventos de una misma órden.

(Art. 11.) Se prohibe el uso público del hábito religioso á las personas de ambos sexos.

(Art. 12.) Todos los bienes raices, muebles y semovientes, rentas, derechos y acciones; todas las casas de comunidad de ambos sexos, así suprimidas, como subsistentes, se aplican á la real caja de Amortizacion, para la estincion de la Deuda pública, quedando sujetos, como hasta aquí, á las cargas de justicia, civiles y eclesiásticas, á que estén afectos.

Todo fué ratificado al fin, por la ley de 29 de Julio de 1837, con ligeras variaciones, que se notarán confrontándolas; no pudiendo omitir aquí, por su importancia y trascendencia, los artículos de dicha ley, que hacen mas al caso, y mas convienen para la recta inteli-

gencia, en este punto, del Concordato de 1851, y de las disposiciones posteriores.

«Art. 1.° Quedan estinguidos, dice la ley, en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones, y demás casas de religiosos de ambos sexos.

»Art. 2.° Se esceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los colegios de misioneros para las provincias de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo, las cuales subsistirán, con la denominacion de Colegios de la Mision de Asia. El Gobierno fijará el número de indivíduos, que deben componer cada colegio, segun lo exijan las circunstancias, y arreglará todo lo correspondiente á su buen régimen, y lo relativo á la admision de novicios.

»Art. 3.° Se autoriza al Gobierno para que provisionalmente, y donde lo juzgue necesario, mientras se provee por otros medios á la enseñanza, conserve algunas casas de escolapios; pero estas casas no se considerarán ya como comunidades religiosas; sino como establecimientos de instruccion pública, dependientes del Gobierno, que les dará reglamentos para su régimen interior, y con sujecion, en cuanto á la enseñanza, á los planes generales que rigen, ó rigieren en adelante.

»Art. 4.° Se autoriza igualmente al Gobierno para que conserve, donde y mientras sean necesarias, algunas casas de los antiguos conventos hospitalarios, como establecimientos civiles de hospitalidad, y bajo los reglamentos que les dé el mismo Gobierno.

»Art. 5.° Se le autoriza tambien, para que pueda conservar bajo su dependencia inmediata, y como simples establecimientos civiles hospitalarios, algunas casas de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul, donde las considere necesarias, y con calidad de por ahora, mientras se adoptan los medios convenientes de suplir su falta, rigiéndose entre tanto por los reglamentos que se les den.

»Art. 6.° Se autoriza por último al Gobierno, para que en los mismos términos puedan conservarse algunas casas de beatas, dedicadas á la hospitalidad y enseñanza.

»Art. 7.° El Gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la conservacion y arreglo de los conventos y colegios de los Santos Lugares de Jerusalen y sus dependencias.

»Art. 9.° Sin embargo de lo prevenido en el art. 1.°, las religiosas profesas, que quieran perseverar en el género de vida que han abrazado, podrán continuar en ella bajo el régimen de las preladas que elijan y sujetas á los ordinarios diocesanos.

»Art. 10. Las juntas creadas por Real decreto de 8 de Marzo del año próximo pasado, en las cabezas de todas las diócesis y en la córte, continuarán con el encargo de reducir el número de conventos de religiosas al que crean conveniente, para contener con comodidad á las que quieran permanecer en ellos, procurando, en cuanto sea posible, distribuir las de los que se cierren, entre los demás de la misma órden que subsistan, y arreglándose á las bases siguientes:

»1.° No se conservará abierto ningun convento ó monasterio, que tenga menos de doce religiosas profesas; ni se volverán á abrir los que estén ya cerrados, aunque antes de cerrarse tuviesen aquel número.

»2.° No subsistirá en una misma poblacion mas de un solo convento de la misma órden.

»3.° Si por circunstancias especiales creyesen las juntas diocesanas que es útil ó necesario conservar en una poblacion dos conventos de una misma órden, lo harán presente al Gobierno, que queda autorizado para resolver sobre ello lo que convenga.

»Art. 11. Los novicios y novicias, escepto los de los colegios de la mision de Asia, no podrán ya continuar en los conventos, y el Gobierno cuidará de que así se verifique.

»Art. 12. Las religiosas, que permanezcan en las casas ó conventos, que queden abiertos, tienen la facultad de solicitar su exclaustracion en cualquier tiempo, acudiendo para ello al jefe político ó alcalde constitucional, los que la concederán y dispondrán sin ningun género de retraso, poniéndolo en noticia de la junta diocesana y del ordinario.

»Art. 13. Las religiosas exclaustradas ya, y las que se exclaustraren en adelante, no podrán volver á la vida comun.

»Art. 14. Se prohibe á las personas de ámbos sexos el uso público del hábito religioso.

»Art. 15. Los regulares exclaustrados, ordenados *in sacris*, quedan en la clase de eclesiásticos seculares, bajo la autoridad de los respectivos ordinarios.

»Art. 16. Los que no hubiesen recibido órdenes mayores gozarán de los mismos derechos, y estarán sujetos á las mismas obligaciones que los demás españoles.

»Art. 17. En los monasterios y conventos estinguidos, que tenian aneja la cura de almas, se conservarán abiertas las iglesias, siempre que el Gobierno lo juzgue conveniente, oyendo á la autoridad eclesiástica y á la Diputacion provincial, y se proveerá á la dotacion de los ministros por los medios acostumbrados.

»Art. 20. Todos los bienes raices, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ámbos sexos, inclusas las que quedan abiertas, se aplican á la caja de amortizacion para la estincion de la deuda pública, quedando sujetos á las cargas de justicia que tengan sobre sí. Los muebles de las casas que continúen abiertas, quedarán en ellas para su uso, formándose el correspondiente inventario.

»Art. 21. Se esceptúan de la disposicion contenida en el artículo anterior, los bienes, rentas, derechos y acciones pertenecientes á los colegios de mision para las provincias de Asia, á la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalen, y los que se hallen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública, como tambien la parte de los correspondientes al monasterio del Escorial, que resulte pertenecer al real patrimonio.

»Art. 26. Los religiosos de ámbos sexos, que se exclaustraren, podrán llevar consigo los muebles, ropas y libros de su uso particular.

»Art. 27. Los regulares exclaustrados y los secularizados en las épocas anteriores, que no lo hubiesen sido á título de patrimonio ú otra cóngrua suficiente, ni hayan obtenido despues capellanía, ú otra renta, ni tengan otros medios para ocurrir á su decente subsistencia, percibirán una pension diaria.

»Art. 28. Esta pension será de cuatro reales para los sacerdotes ordenados *in sacris*, que no pasen de cuarenta años de edad; de cinco reales para los que, pasando de cuarenta años, no hayan cumplido sesenta; y de seis para los que hayan cumplido esta edad. Los coristas y legos, que se hallen impedidos de trabajar, á juicio de las juntas, percibirán tres reales diarios, hasta la edad de sesenta años; y cuatro despues de esta. No estando impedidos y teniendo la edad de cuarenta años, percibirán la misma pension de tres y cuatro reales. Los que ni estén impedidos, ni tengan cuarenta años, solo percibirán, por espacio de dos, la pension de tres reales diarios. Los hospitalarios, á quienes prohibia su instituto ascender á las órdenes sagradas, se considerarán como legos profesos; pero si hubiesen sido prelados en sus conventos, se les reputará como los sacerdotes exclaustrados, en cuanto á la pension que han de percibir.

»Art. 29. Las religiosas secularizadas en las épocas anteriores, y las exclaustradas actualmente, ó que se exclaustraren en lo sucesivo, gozarán de la asignacion de cinco reales diarios. Las que prefieran continuar en la vida monástica solo percibirán cuatro reales.

»Art. 30. Todas las pensiones cesarán luego que los interesados obtengan renta eclesiástica ó del Estado, mayor ó igual á la de la asignacion. Si fuere menor la renta adquirida, continuarán percibiendo la diferencia.

»Art. 31. Tanto los exclaustrados y secularizados, que obtengan alguna colocacion civil ó eclesiástica, como las autoridades, corporaciones é indivíduos, que intervengan en su concesion, darán parte á la junta diocesana en el término de ocho dias, para que cese la pension.

»Art. 32. Perderán el derecho á la pen-

sion respectiva los religiosos de ámbos sexos, que se hallen en alguno de los casos siguientes:

1.° Los que hayan servido en las facciones.

2.° Los que, habiendo sido procesados por delitos políticos, despues del decreto de amnistía de 1832, no hubiesen obtenido sentencia absolutoria.

3.° Los que se hayan ausentado del reino sin licencia del Gobierno ó pasaporte de la autoridad competente.

Se esceptúan de esta regla aquellos que, habiéndose ausentado ántes de la publicacion del decreto de 8 de Marzo de 1836, se restituyan á la Península, y se presenten á las autoridades en el término de cuatro meses, contados desde la promulgacion de esta ley.

4.° Los que se ausenten de la residencia que se les haya asignado, sin conocimiento y anuencia de la junta diocesana y sin pasaporte de la autoridad civil.....

»Art. 36. Por cada casa de religiosas, que subsista, se abonarán 2,200 reales anuales para médico, cirujano y botica.

»Art. 37. El Gobierno recomendará eficazmente á los prelados diocesanos y demás patronos y electores, que atiendan los méritos de los exclaustrados, para su colocacion, siempre que obtengan de los jefes políticos un atestado de su buena conducta política, y lo merezcan además por su moralidad y aptitud.

»Art. 38. Gozarán de la testamentifaccion, de la capacidad para adquirir entre vivos ó *ex-testamento* ó *abintestato*, y de los demás derechos civiles que corresponden á los eclesiásticos seculares, los religiosos secularizados y exclaustrados de ámbos sexos, desde que salieron de los conventos, y las monjas, que continúen en los que queden abiertos, desde el 8 de Marzo de 1836.

»Art. 39. Las juntas diocesanas y las demás autoridades é individuos, á quienes toque intervenir en la ejecucion de lo prevenido en esta ley, procederán, en cuanto no se oponga á ella, conforme al reglamento de 24 de Marzo de 1836 y á los que forme el Gobierno en lo sucesivo.»

La novedad, inducida por este inmenso acontecimiento en el servicio parroquial, desapareciendo de golpe tan numerosos y gratuitos auxiliares, exigia que, si algun dia se celebraba un Concordato con la Santa Sede, se fijase en ella séria atencion. Formalizóse, al fin, el Concordato de 1851, y en él, y por lo que hace á las comunidades religiosas, se dispone:

»Art. 29. A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos, de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar á los párrocos, asistir á los enfermos, y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de Misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan, donde sea necesario, *oyendo préviamente á los prelados diocesanos*, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paul, San Felipe Neri y *otra órden de las aprobadas por la Santa Sede*, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

»Art. 30. Para que haya tambien casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocacion las que sean llamadas á la vida contemplativa, y á la activa de la asistencia de enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones, tan piadosas como útiles á los pueblos, se conservará el instituto de Hijas de la Caridad, bajo la direccion de los clérigos de San Vicente de Paul, procurando el Gobierno su fomento.

»Tambien se conservarán las casas de religiosas, que á la vida contemplativa, reunan la educacion y enseñanza de niñas, ú otras obras de caridad.

»Respecto á las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas, en que convenga la admision y profesion de novicias, y los ejercicios de enseñanza y de caridad, que sea necesario establecer en ellas.

»No se procederá á la profesion de ningu-

na religiosa, sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma.»

En el art. 35 se estipula, que el Gobierno habrá de proveer, por los medios mas conducentes, á la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el artículo 29, observándose, en cuanto á las religiosas, lo dispuesto en el art. 30. Y se dispone, por último, que los bienes, aun no vendidos, de los conventos de religiosas, se devolverán á las mismas, y en representacion de ellas, á los prelados diocesanos: y que teniendo Su Santidad en cuenta el estado de dichos bienes (esto es, que los no vendidos aun, eran los menos codiciables), autorizaba, que bajo la autoridad de los prelados se enajenaran en subastas públicas, y el Gobierno abonase su importe en inscripciones intransferibles del 3 por 100, las cuales y sus intereses, entregados á los diocesanos respectivos, se distribuirian entre todos los conventos de que precedian, segun las necesidades de los mismos, sin perjuicio de continuarse por el Gobierno las pensiones asignadas, en lo que aquellos no bastaren.

En el art. 36 se amplió la obligacion supletoria del Gobierno, á los gastos de culto y reparacion de sus templos.

En el art. 13 del Concordato adicional de 1859, se ratifican y renuevan las obligaciones contenidas en el 35 y 36 del Concordato de 1851.

No ofreció dificultad la ejecucion del artículo 29 del mismo, en cuanto á establecimiento de casas de mision, para Ultramar y para Africa; antes se estableció considerable número de ellas, y para Africa y Palestina, como las de Santiago de Galicia, Filero, Granollers y Lequeitio.

Pero la ofreció y grande, la parte del mismo artículo, relativa al establecimiento de una tercera órden de las aprobadas por Su Santidad, oyendo sobre ella á los prelados diocesanos. Pero ¿habia de oirse á todos colectivamente, ó á cada uno respecto de su diócesis? En el primer caso, de seguro no habria acuerdo, por que cada uno opinari por la que estimase mas favorable á su obispado, ó á que tuviere mayor inclinacion; en el segundo, seria este mismo el resultado, en cuyo supuesto, ya no seria taxativamente *una órden mas*, la que se estableciese; sino tantas, como diócesis, ó poco menos, si como era posible, algunos diocesanos convenian en una misma.

Consultado sobre ello el Consejo Real, se dividió, opinando en el primer concepto la mayoría, y en el segundo una minoría respetable por su número y por las personas.

Esa divergencia detuvo á los Gobiernos por algun tiempo; pero en 1868, de acuerdo con el nuncio de Su Santidad, se adoptó por el Gobierno el dictámen de la minoría, si bien su aplicacion deberia ser gradual, empezando por aquella diócesis, que mayor economía ofreciera en cuanto á edificio, y mayores facilidades por parte del personal.

Tal como queda espuesto, era el estado de las comunidades religiosas en España, al promediar el mes de Setiembre de 1868. Verificado el alzamiento de Cádiz, de fin del propio mes, estensivo luego á las demás provincias; destronada la dinastía reinante y constituidas juntas revolucionarias, y despues un Gobierno provisional, hasta la reunion de Córtes Constituyentes, por decreto del Gobierno de 18 de Octubre, se suprimieron las casas de jesuitas y fueron estos expulsados de España. Se suprimieron asimismo las conferencias de San Vicente de Paul; se redujeron los conventos de monjas, trasladándose las de los suprimidos á los que se conservaban, y por último, y ya como general, se dictó el decreto siguiente:

«En uso de las facultades, que me competen, como individuo del Gobierno provisional y ministro de Gracia y Justicia, he venido en decretar, de acuerdo con el Consejo de ministros, lo siguiente:

Artículo 1.° Quedan extinguidos, desde esta fecha, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ámbos sexos, fundados en la Península é islas adyacentes, desde 29 de Julio de 1837 hasta el dia.

Art. 2.° Todos los edificios, bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las casas de comunidad de ámbos sexos suprimidas por el

artículo anterior, pasarán á ser propiedad del Estado.

Art. 3.° Los religiosos y religiosas, exclaustrados á consecuencia de las disposiciones anteriores, quedarán sujetos á los respectivos ordinarios, y sin derecho alguno á percibir la pension concedida á los que ingresaron en los conventos antes de la espresada fecha de 29 de Julio de 1837.

Art. 4.° Las religiosas, cuyos conventos quedan suprimidos, á consecuencia de lo dispuesto en el art. 1.° de este decreto, podrán ingresar en otros de su misma órden de los subsistentes, ó pedir su exclaustracion, reclamando la dote, que llevaron al entrar en religion de la persona ó establecimiento donde se encontrare.

Art. 5.° Todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas, que quedaron subsistentes por la ley de 29 de Julio de 1837, se reducirán en cada provincia á la mitad, y los gobernadores civiles, oyendo á los diocesanos, designarán, en el término de un mes, contado desde la publicacion de este decreto, los que hayan de conservarse, prefiriendo aquellos que tengan algun mérito artístico, y trasladando las religiosas de los que se supriman á otros de la misma órden.

Art. 6.° Se prohibe en todos los monasterios y conventos la admision de novicias y profesion de las que hoy existan, aunque hayan ingresado con el carácter de organistas, cantoras ó cualquier otra denominacion.

Art. 7.° Las religiosas profesas, que en virtud del presente decreto pueden continuar en sus conventos, monasterios, etc., tendrán la facultad de solicitar su exclaustracion en cualquier tiempo, acudiendo al gobernador civil, que la acordará desde luego, dando conocimiento al diocesano.

Art. 8.° Las religiosas, cuya profesion fuere anterior á la citada ley de 29 de Julio de 1837, tendrán derecho á la pension de 5 rs., señalada en el art. 29 de la misma; pero las de entrada posterior, solo lo tendrán á reclamar sus dotes, en la forma prevenida en el artículo 4.° del presente decreto.

Art. 9.° Las hermanas de la Caridad, de San Vicente de Paul, de Santa Isabel, las de doctrina cristiana y las demás conocidas con cualquier otra denominacion, que hoy están dedicadas á la enseñanza y beneficencia, se conservarán, quedando sujetas desde la publicacion de este decreto á la jurisdiccion del ordinario, en cuya diócesis residan.

Madrid 18 de Octubre de 1868.—El Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz.»

Tal es el estado, y tales han sido las vicisitudes de las órdenes religiosas en España, á lo que, como indicamos en la cabeza, limitamos el presente artículo.

APÉNDICE.

Por vía de apéndice y conclusion, diremos que segun el Conde de Toreno, se contaban en España antes de la invasion francesa, 2,051 casas de religiosos, y 1,075 de religiosas, ascendiendo el número de religiosos de ambos sexos y de todas clases dependientes de los conventos, á 92,721.

En 1836, el estado numérico, que presentó la Junta eclesiástica, entonces nombrada, limitado á los conventos de varones, que existian, es el siguiente:

ORDENES.	Conventos.	Individuos.
Benedictinos.	16	165
Id. de Observantes de Valladolid.	44	1,819
Bernardos cistercienses..	16	576
Id. de Castilla y Leon.	37	1,072
Cartujos y trapenses.	17	486
Gerónimos.	43	1,380
Basilios.	14	267
Dominicos.	221	4,593
De S. Francisco. . .	651	18,514
Capuchinos.	117	3,454
Agustinos calzados. .	121	2,015
Id. Recoletos . . .	32	799
Carmelitas calzados.	78	169
Id. descalzos.	118	2,504
Trinitarios calzados.	58	1,161
Id. descalzos.	29	669
Mercenarios calzados.	80	1,849
Id. descalzos. . . .	28	573
Mínimos de S. Francisco de Paula. . .	80	1,074
S. Juan de Dios. . .	57	520
Premostratenses. . .	16	304
Compañía de Jesús. .	10	180
Clérigos menores. . .	11	217
Agonizantes.	6	95
Escuelas pías. . . .	30	498
Servitas.	10	315
26 órds. al todo, con	1,940	45,268

Al estallar la revolucion de 1868, el número de conventos y de religiosos y religiosas en clausura, que existian en la Península é islas adyacentes, segun la *Guia eclesiástica* de dicho año, era el siguiente:

Ordenes de varones.	Conventos.	Individuos.
Escuelas pias.	34	548
San Vicente de Paul.	6	83
San Felipe Neri.	7	50
Agustinos calzados.	2	156
Agustinos recoletos.	2	166
Predicadores.	2	162
Franciscos descalzos.	3	113
Compañia de Jesús.	5	221
Congregacion de sacerdotes misioneros de San Alfonso Ligorio.	1	7
TOTALES.	62	1,506
De *Religiosas*, de varias órdenes.	867	14,825
TOTALES de Religiosos de ambos sexos.	929	16,331

COMUNION. El conjunto de los que profesan una misma creencia. Véase **EXCOMUNION, IGLESIA.**

COMUNION. Version de *communio*, y originariamente de *commune*, cosa comun, ó de que participan á la vez, ó conjuntamente, dos ó más, segun espresamos en la palabra *comun*, y tiene en ambos derechos varias aplicaciones. Así se dice en lo civil *comunion* de bienes entre condueños; y en lo dogmático comunion, por la colectividad de los que profesan unos mismos dogmas, comunion sacramental etc. Véase el siguiente artículo.

COMUNION SACRAMENTAL. La participacion de la Sagrada Eucaristía, en la forma que lo tiene determinado la Iglesia católica.

En los primeros siglos se daba la comunion hasta á los párvulos. La práctica fué limitándola en la Iglesia latina á solo los adultos, y así lo estableció luego el Concilio de Trento; continuando, sin embargo, aquella práctica en la Iglesia griega.

Así mismo en los primeros siglos la comunion era diaria. Con el tiempo se redujo, como obligatoria, á tres veces en el año: en las pascuas de Navidad, Resurreccion y Pentecostés. Los concilios de Letran y de Trento la limitaron á una sola vez, por pascua de Resurreccion, y tambien á la hora de la muerte, pudiendo; pena en este caso de privacion de sepultura eclesiástica. Véase **CONFESION SACRAMENTAL.**

Tambien, hasta los siglos medios, la comunion se daba en ambas especies. Pero la profanacion, muchas veces inevitable, de verterse el cáliz en los niños, en los enfermos y aun en los adultos; la repugnancia de beber todos por un mismo cáliz; la que muchos tienen al vino, y el ser nocivo á veces para la salud, ya á los enfermos, ya á los sanos, hizo que en la práctica se limitase la comunion de los legos, y de los sacerdotes, cuando no celebran, á la especie sola del pan, y así lo declararon solemnemente, primero, el concilio de Constanza (1418, seccion 13), y despues el de Trento (ses. 21, capítulos 1, 2, 3 y 4; y cánon 1.° y 2.° de la misma). El cánon 2.° dice así: «*Si quis dixerit, Sanctam Ecclesiam Catholicam non justis causis, et rationibus abductam fuisse, ut laicos, atque etiam clericos non conficientes, sub panis tantummodo specie communicaret, aut in eo errasse: anathema sit.*»

Se decia comunion lega la del pueblo, para diferenciarla de la del celebrante; y á ella se reducia al sacerdote, que no cumplia con sus deberes, lo cual equivalia á lo que despues se ha practicado, recogiendo al presbítero *las licencias de celebrar*.

Comunion *extranjera* ó *peregrina*, se llamaba la de los estranjeros, que eran recibidos á ella por solo la cualidad de cristianos, sin ninguna otra consideracion, ni prerogativa. A la comunion peregrina se reducia á los presbíteros y obispos, que faltaban gravemente á sus deberes: comulgaban con los legos, y como lo hacian los peregrinos, pues no podian celebrar; y quedaban, además, en suspenso de sus dignidades, prebendas y cargos: no era una verdadera *excomunion*; sino como una *cesacion á divinis*, con efectos tambien de temporalidad.

Como prevaleció la doctrina de que los *criminales públicos* no podian ser admitidos á la comunion, surgió la cuestion, de si esta podia darse á los reos, sentenciados á muerte. Prevaleció la opinion negativa en la Igle-

sia galicana: la Iglesia española siguió y sigue en este punto á la Iglesia general, y por tanto, las disposiciones canónicas, que autorizan la resolucion afirmativa, si el sentenciado pide convenientemiente la comunion. (C. *Quesitam*; c. 30, *causa* 13, *quæst* 2.)

Las leyes de Partida acogieron las disposiciones canónicas. «Si aconteciere que algun ladron ó malfechor sea juzgado de muerte.... si confesase, débenle enterrar en el cementerio de alguna eglesia, magüer sea ajusticiado, *é débenle dar comunion, si la demandare.*» (Ley 7, tít. 13, Part. 1.ª)

COMUNISMO. Imponente teoría social, que, á la par que la denominada *socialismo*, tiende á sustituir la vieja civilizacion de las naciones, cambiando radicalmente el modo de ser de la propiedad, de la sociedad, del ciudadano y del Estado. Véanse estos artículos, con los de DEMOCRACIA y REPUBLICA.

CONATO. Del verbo latino *conor*; pugnar, procurar con insistencia; pudiera decirse tambien que con fuerza; pero la fuerza es inherente siempre á la pugna. La fuerza, sin embargo, puede ser material; y tambien meramente de voluntad, significada por la *insistencia*. Antes del Código penal el conato espresaba *tentativa*: hoy, esta voz es técnica y legal, y no puede sustituirse. Todavía el conato espresará bien la tentativa repetida, pues, con propiedad, eso es conato. En este caso el conato agrava la tentativa, pues el segundo y ulteriores actos arguyen premeditacion, aunque no la hubiere en el primero. Véase TENTATIVA.

CONCEJO. Etimológicamente, suena *junta*. Viene, sin duda, del verbo latino *concedo*, en el sentido de caminar juntamente, caminar á un fin. En la legislacion moderna esta voz ha sido reemplazada por la de *ayuntamiento*, espresando ambas la corporacion municipal, hoy compuesta de alcalde ó alcaldes, sus tenientes, regidores y el síndico; aquella, en su tiempo, de los alcaldes, regidores, procurador síndico, procurador *personero*, y diputados del comun. Véase AYUNTAMIENTO.

Como la voz ayuntamiento, la de concejo significaba tambien el edificio de las sesiones, llamado por eso casa de concejo, y concejo las sesiones mismas, y el territorio ó distrito municipal: se decia, por ejemplo, concejo del Infiesto, como hoy ayuntamiento del Infiesto, el conjunto de poblaciones y vecinos del distrito. Los individuos del cuerpo se llamaban *concejales*.

La voz concejo era mas usada, y casi peculiar, en varias regiones del Norte y Noroeste de España; en el centro y Mediodía la corporacion se llamaba tambien *cabildo*, capitulares sus individuos, y casa capitular la de las sesiones. En lo legal, sin embargo, la voz concejo era general, como hoy la de ayuntamiento; y así, en las circulares, órdenes, é instrucciones comunes, diferenciando entonces las atribuciones y funciones de las partes componentes del conjunto, se decia: *á las justicias, concejo, y vecinos de...* Era la razon de diferenciar, por que los alcaldes, además de las funciones administrativas, ejercian, como es sabido, jurisdiccion de primera instancia, con asesor.

Se llamaba concejil, lo que era del concejo, como prado, dehesa, monte concejil.

Cuando á las sesiones habia de concurrir todo, ó parte del vecindario, pero señaladamente en el primer caso, se llamaba *concejo abierto*. No podia esto tener lugar sino en virtud de provision del real acuerdo, y estrictamente para los fines espresados en ella. Se verificaba siempre para fines generales y obligaciones nuevas, que alcanzaban á todo el concejo. De ordinario la convocatoria se hacia, y así convenia para que nadie alegase ignorancia, á toque de campana, lo que se decia á *campana tañida*.

Hoy, como funcion propia de la corporacion, y sin esperar autorizacion de nadie, el ayuntamiento, cuando lo estima oportuno, se asocia para las sesiones, número de mayores contribuyentes, ó todo el vecindario, segun la importancia, utilidad ó gravedad del caso.

Como la denominacion se aplicaba tambien, segun queda insinuado, al comun de vecinos del territorio, concejo era lo propio que *comun*, y le es aplicable la historia, y la teo-

ría municipal, en sus vicisitudes que indicamos en el artículo **COMUN, COMUNES.**

CONCEJO DE LA MESTA. Deciase tambien **HONRADO CONCEJO DE LA MESTA.** Es de todos sabido, que *Mesta* espresa la gran riqueza *pecuaria*, de tantos modos, y tan exorbitantemente favorecida por nuestras leyes, al través de tantos siglos: pues que ya en los tiempos del Rey D. Alfonso el Sabio, aparece en el órden legal y en la historia, como una riqueza atendible y favorecida; y en su régimen, como una asociacion organizada, con sus privilegios y sus autoridades, y estas, con las denominaciones con que las hemos conocido siete siglos despues.

La palabra *Mesta* espresa, en efecto, en el lenguaje usual, y en el de las leyes, unas veces la material riqueza *pecuaria*, la ganadería, ya *trashumante* ya *estante*; otras, la colectividad organizada de sus propietarios, con su régimen. Para no romper la unidad que constituyen uno y otro concepto, habria que tratarlos conjuntamente; pero la índole de la ENCICLOPEDIA no lo permite; y así, espondremos el relativo á la material riqueza pecuniaria, en el artículo **MESTA**; y en el presente, con las referencias necesarias, lo concerniente á su régimen, segun lo constituian el honrado concejo de la Mesta, y sus dependencias oficiales, como *partidas*, *cuadrillas*, *alcaldes de cuadrilla*, *de alzadas*, *de apelaciones*, *y alcaldes mayores entregadores*. Véase **ALCALDES DE LA MESTA.**

En artículos anteriores dejamos indicado, que *concejo* encierra siempre el concepto de *reunion*, conjunto organizado de personas. Y así el de la Mesta era el conjunto de ganaderos, con sus autoridades y con sus ordenanzas, que iremos indicando.

Entre los privilegios contenidos en el Cuaderno de leyes de la Mesta, el primero es, en efecto, del Rey D. Alfonso el Sabio, dado en 2 de Setiembre de 1273, y que empieza así: «Al *concejo de la Mesta* de los pastores del mio Reyno, salud y gracia: sepades que me dijeron *que aviades avenencia entre vos*, que toda postura que pusiéredes en nuestras *mestas*, que fveren á mio servicio y de pro de la tierra, en razon de la guarda de vos y de vuestras *cavañas* y de *vuestras mestas*, que valiesse: é *agora dizen* que ay algunos, que son reveldes, que non quieren ser en ello, é esto non tengo por bien.»

Continúa ordenando que las dichas posturas y *avenencias* sean obligatorias y respetadas: que los *alcaldes de la Mesta* puedan compeler al cumplimiento, y que sean auxiliados por los *alcaldes entregadores*: que estos no dejen de ir, cada una vez, *á la Mesta* de Montemolin, y á las otras *dos mestas*, que se celebrasen en los puntos en donde aquellas se acordare. Habla además el privilegio de la *prohibicion de dehesas nuevas*, y de la apertura *de cañadas*; permite la *corta de leña y madera para el ministerio de la pastoría*, y de *corteza* para curtir los calzados: autoriza á los *alcaldes entregadores* para castigar los delitos de heridas y malos tratamientos, que se hiciesen á cualesquiera pastores, y los agravios que les infiriesen los hombres de los señoríos.

Como hemos indicado al principio, aparece ya en esta época la asociacion de trashumantes, y por tanto la mesta organizada, y casi como en los últimos siglos se la ha conocido; el nombre de *Concejo de la Mesta*, la costumbre de la *trashumacion*, las *reuniones generales* dentro de cada año, *alcaldes de cuadrillas*, *alcaldes entregadores*, *fuero privativo*, *libertad de cañadas*, cortapisas puestas á la estension de la labranza y del adehesamiento. El escritor Diaz Navarro hace notar, que el rey D. Alfonso prohibe que se cobre *montazgo* á los pastores, sino en donde hubiere para ello títulos, dados por su padre; lo que prueba que, ya antes, y por lo menos en tiempo de San Fernando, tenia la Mesta organizada la trashumacion.

Sancho el Bravo, en 13 de Enero de 1284 y 5 de Junio de 1285, volvió á mandar que no se hiciesen nuevas dehesas sin permiso del Rey, y que se deshicieran las hechas: que los entregadores cuidarán que las cañadas se conservaran abiertas; y que los pastores no pagasen servicios, monedas, ni otros pechos, en los lugares y términos, por donde pasasen para ir *á los estremos*, si pro-

basen haberlos pagado en los pueblos de su vecindad; y que por el medio diezmo *en los estremos* no se les cobrara sino un cordero de cada veinte.

Segun el favor y la importancia de la Mesta, en 11 de Enero de 1500 nombraron los Reyes Católicos presidente del concejo de la misma al licenciaciado Hernan Perez de Monreal, de su Consejo; y dispusieron que de allí en adelante presidiera siempre las reuniones del concejo de la Mesta, en nombre de los Reyes, un ministro del Consejo Real, y así se ha verificado hasta nuestros dias.

Durante tres siglos y el primer tercio del presente, la Mesta ha tenido dos grandes reuniones anuales. Las primeras se tenian en lo antiguo en Enero ó Febrero; despues en Marzo, Abril y aun Mayo. Desde hace muchos años se venian celebrando en Abril empezando el dia 25 del mes. Las de otoño se verificaban en Agosto, Setiembre ú Octubre; y, por último, se fijó su principio en 5 de este último mes.

Las reuniones se tuvieron tambien en multiplicados puntos; pero desde mediados del siglo XVIII la mayor parte de las juntas fueron en Madrid, en donde se han celebrado todas las del siglo actual, hasta la última, habiéndose construido al efecto una casa de la propiedad del concejo, que aun ahora sigue ocupando la Asociacion general de ganaderos, que le ha reemplazado.

Los hermanos de la Mesta estaban divididos en cuatro *partidos*, y eran los de Soria, Cuenca, Segovia y Leon; y los partidos se dividian en *cuadrillas*. Véase este artículo.

La representacion del presidente del concejo, desde que lo era un consejero de Castilla, no se limitaba á mera prerogativa de honor; sino que llevaba consigo jurisdiccion.

La Mesta no podia reunirse, ni llevar á cabo ninguna medida importante, sin contar con su presidente, que administraba justicia, hacia ejecutar sus sentencias y dictaba medidas de gobierno. De aquí resultó que la verdadera importancia de la asociacion de trashumantes, como cuerpo administrativo, fuerte y poderoso, empieza desde que los consejeros de Castilla lo presidieron; y mas especialmente aun, por el influjo que ejerció en su favor uno de ellos, el célebre D. Juan Lopez de Palacios Rubios, que lo presidió, durante trece años seguidos, desde 1510 á 1522; no habiendo habido despues quien tuviese la presidencia tanto tiempo, pues el conde de Campomanes y el marqués de Roda, que son, despues de aquel, los que por mayor período la desempeñaron, fué solo por cuatro años, el primero desde 1779 á 1782, y el segundo desde 1792 á 1795.

Desde el gobierno ó presidencia de Palacios Rubios, la jurisdiccion especial de la Mesta propendió á estenderse aun á los que no eran hermanos trashumantes: las pretensiones de estos contaron con un apoyo eficaz: sus privilegios y leyes se recopilaron, y empezaron á formar un cuerpo, y tuvieron principio las cuestiones, que habian de durar tres siglos, sobre el mas exorbitante de sus privilegios, cual es el llamado de *posesion*, segun esplicamos en el artículo MESTA.

Ordenóse que no se reputase hermano de la Mesta, sino el que enviase su ganado á los *estremos*, ó de estos á las sierras, y que todos los demás ganaderos quedasen exentos de la jurisdiccion de los alcaldes mayores entregadores.

El concejo creyó su causa y sus intereses tan comprometidos por esta real disposicion, que el año 1603 no celebró sus ordinarias juntas generales, ni se ocupó en otra cosa, que en gestionar para la revocacion de la indicada Pragmática. Pero lejos de conseguir su objeto, se espidió otra en 13 de Diciembre de 1605, por la cual se declaró, «que se entendiese ser hermanos de la Mesta aquellos, de cuyos agravios hubiesen de conocer los alcaldes mayores entregadores, los dueños propios de los ganados que bajan de las sierras á los estremos, ó suben de los estremos á las sierras, y los que salen de sus suelos, territorios y jurisdicciones á otros distintos, donde no hay pasto comun; y que no conociesen de los agravios hechos á aquellos, que tan solamente salieren de un término á otro, dentro de la jurisdiccion; ni de los hermanos de la Mesta, que estuvieren *estantes* en sus sue-

los y jurisdicciones; pues de los agravios de estos habian de conocer las justicias ordinarias; y que los alcaldes de cuadrilla de Mesta conocieren entre los estantes, aunque no fueren hermanos de Mesta, en los tres casos, para que tenian jurisdiccion en las sierras, y eran, hacer mestas, señalar tierra á los ganados enfermos, y conocer de despojos de posesiones entre los dichos hermanos de Mesta, con que no pudiesen los alcaldes de cuadrilla, ni entregadores, compeler á persona alguna á ser hermano de Mesta, fuera de los dichos casos.»

Aunque esta pragmática, dada con audiencia, y, hasta cierto punto, con el asentimiento del concejo, modificaba en algunas partes en su favor las disposiciones de la anterior, la Mesta la consideró siempre como un grave contratiempo. Desde entonces los dueños de ganados estantes, que no quisieron unir sus intereses á los de los trashumantes, estuvieron exentos de su jurisdiccion; y la Mesta, que continuó apropiándose esclusivamente el título de *Cabaña Real*, no solo no fué la generalidad de las ganaderías de todas clases; sino ni aun de todas las lanares.

Pero siguió empleando sus esfuerzos contra las condiciones impuestas por el Reino al servicio de millones. Varias tentativas de concordia fueron infructuosas. En 25 de Mayo de 1620, la Mesta obtuvo del Consejo de Castilla ejecutoria, recogiendo dichas condiciones, y mandando observar las leyes de sus privilegios. Por último, se llegó á una concordia, siendo sus principales prescripciones: que solo se tuvieran por hermanos de la Mesta á los dueños de ganados, que bajan de las sierras á los *estremos*, ó suben de los estremos á las sierras, y los que voluntariamente lo quisieran ser, aunque no enviaran así sus ganados: que nadie pudiese ser compelido, ú obligado contra su voluntad, sino en los tres casos definidos por la Pragmática de 1603: que los alcaldes de cuadrilla no conocieran, sino de lo que les incumbia entre hermanos: que no hubiera alcaldes de cuadrilla, sino en las partes y lugares donde hubiere hermanos: que no pudiera nadie ser sacado á mayor distancia, que la de cinco leguas, del lugar de su residencia: que los alcaldes mayores entregadores no volvieran á cometer el abuso de colocar sus audiencias en los confines de la jurisdiccion de la Mesta, para llamar desde allí á los que residian dentro de la distancia de cinco leguas; ni molestaran mas á los exentos: que en caso de duda, sobre ser alguno hermano de la Mesta, decidiese la justicia ordinaria: que los alcaldes de cuadrilla no usaran de vara de justicia, ni pudieran prender á nadie: que, no habiendo producido efecto la condicion de millones, anteriormente establecida, sobre que los presidentes del concejo nombrasen dos pesquisidores, dejaran en adelante los alcaldes mayores entregadores, en poder del corregidor, gobernador ó alcalde del punto en donde pusieren sus audiencias, un pliego cerrado firmado por ellos y su escribano, con una relacion de los concejos, comunidades y personas contra quienes hubiesen procedido: que el presidente del concejo enviara uno ó dos escribanos de su confianza, que abriesen el pliego, é hicieran pesquisa é informacion: que los gastos de estas pesquisas fueran de cuenta del concejo: que los alcaldes de la Mesta no pudieran ejecutar sus sentencias, sino hasta tres mil maravedís, y, si el denunciado depositare el resto, y mediante fianza ó persona abonada, fueran soltados los presos, y remitidas las causas y pleitos á las Audiencias y Chancillerías.

Aunque el concejo aceptó todas estas condiciones, no fué sin oponer siempre objeciones y reparos. La concordia fué definitivamente aprobada por real provision de 6 de Diciembre de 1632, que derogó y revocó todo lo que en contrario estuviese dispuesto por privilegios de la Mesta, leyes y pragmáticas de estos reinos, decretos y autos del concejo, y condiciones de los servicios pasados, mandando que estas se guardasen, *escepto en aquello que estuviere revocado por ejecutoria ó autos*. Estas últimas palabras fueron fundamento de muchos pleitos, de los que, desde la real provision de 1566 no cesó de haber constantemente, y en gran número, entre los mesteños y los vecinos de Estremadura.

Entretanto, como las condiciones de los servicios de millones estaban consideradas leyes del Reino, y aun leyes que tenian sobre las demás la circunstancia de hallarse reducidas á pacto y escritura, muchos pueblos y particulares exigian á los escribanos del Consejo de Castilla que les librasen provisiones, en que dichas condiciones fuesen insertas, para oponerlas en sus pleitos á las ejecutorias, que los hermanos de la Mesta presentasen. El concejo pidió que no se librasen tales documentos, sin darle traslado y oirle; y por Real provision de 24 de Agosto de 1635 se dispuso así, y que el Consejo de Castilla resolviese en cada caso, teniendo presente la concordia aprobada en 1624.

Otra victoria muy importante obtuvo el honrado concejo por entonces. Por Real órden de 28 de Febrero de 1631 se habia dispuesto que, necesitando S. M. tratar cosas importantes á la conservacion de los ganados, y aumento de la Real Cabaña, se diputasen dos personas de cada cuadrilla de la Mesta, que viniesen al efecto á la Córte. Los diputados fueron elegidos en las juntas generales, celebradas en 6 de Marzo de 1631 en Leganés; y de sus trabajos en la córte fué resultado la Real pragmática de 4 de Marzo de 1633, que inserta despues en la Recopilacion, y figurando más adelante como ley 2, del título 27 del lib. 7.° de la Novísima, colocó entre las leyes generales del reino los privilegios más considerables de la Mesta, que hasta entonces no habian podido salir de su cuaderno especial.

Esta pragmática fué el mayor triunfo conseguido en la batalladora vida del honrado concejo, que, por gratitud, conservó siempre, aun despues que la historia la abandonó por completo, la costumbre de unir al nombre de Felipe IV el sobrenombre de *El Grande*.

Entra ahora un período de lucha, en que la Mesta, como esponemos en su artículo, fué perdiendo la mayoría de sus privilegios; y dicho se está que, en la misma escala, disminuirian los del concejo, ó sea su régimen. Como consecuencia y parte de este plan, la Real cédula de 29 de Agosto de 1796 (ley 11, tít. 27, lib. 7, Nov. Rec.) suprimió los cargos de alcaldes mayores entregadores de mestas y cañadas, cuyo número habia sido reducido á dos por otra de 17 de Febrero de 1782, y dió á los corregidores y alcaldes mayores del reino las funciones, jurisdicciones y facultades, que antes ejercian aquellos, aprobando al mismo tiempo la instruccion que deberian observar dichas justicias ordinarias, que en estos asuntos habrian de obrar como subdelegados del presidente del honrado concejo de la Mesta.

Este, considerando la gran decadencia á que habia venido, dispuso en su reunion general de otoño de 1799, crear una junta de gobierno permanente, compuesta de cinco hermanos ganaderos, avecindados y residentes en la córte, que gestionasen de contínuo la manera mas eficaz de restablecer y defender sus privilegios, con todas las facultades que al concejo asistian, debiendo llegar en caso necesario con sus súplicas hasta los piés del trono; pero al año de su establecimiento se dispuso que cesara esta junta.

Así vinieron en decadencia los privilegios de la Mesta, considerándolos como uno de los obstáculos mas eficaces para el fomento de la agricultura. Estas ideas predominaron en las Córtes de Cádiz, que establecieron en España el régimen constitucional, y como consecuencia de ellas se promulgó el decreto de dichas Córtes de 8 de Junio de 1813, por el que se declararon cerradas y acotadas perpétuamente todas las dehesas, heredades y demás tierras de propiedad particular. Esta medida dió el último golpe á dichos privilegios, como puede verse en el artículo **ACOTAMIENTO**.

De esta manera desaparecieron todos los privilegios de la Mesta; pero volvieron á aparecer con la caida del sistema constitucional. El rey, por Real cédula de 1814, accediendo á los deseos manifestados por el procurador general del concejo de la misma, la reintegró en el goce y ejercicio de las leyes, privilegios, usos y costumbres *contenidas en el código ó cuaderno de Mesta*, mandando que sus juntas de tabla y estilo fuesen presididas por el ministro del Consejo de Castilla, á quien tocare por la Real resolucion, á consulta de 11 de Agosto de 1652. Del testo de dicha

Real cédula parece desprenderse claramente la intencion de sobreponer las leyes del Cuaderno de la Mesta á las contenidas en la Novísima Recopilacion, que en algunas partes esenciales las habian alterado. Subsistió, sin embargo, la suspension de los alcaldes mayores entregadores, y otras varias cosas de los antiguos privilegios quedaron sin ser restablecidas, ó entendidas como el concejo habia pretendido siempre entenderlas.

Nuevamente volvió á ser suprimida la Mesta en 1820, y restablecida á fines de 1823, hasta que, restablecido por tercera vez el régimen constitucional, al fallecimiento de Fernando VII, por Real decreto de 6 de Setiembre de 1836, se puso de nuevo en vigor el de las Córtes generales y estraordinarias de 8 de Junio de 1813.

Otro de 23 del mismo Setiembre, dispuso que no se impidiera á los ganados de todas clases, trashumantes, estantes ó riveriegos, el paso por sus cañadas, cordeles, caminos y abrevaderos, ni el pacer en los pastos comunes del tránsito, en que se les hubiere permitido hasta entonces.

Así desaparecian los privilegios de la Mesta, y era consiguiente que desapareciera el concejo: y con efecto, por Real órden de 31 de Enero de 1836, se mandó cesar, estableciendo en su lugar la *Asociacion general de ganaderos*, de que hablamos en su artículo, como en los suyos respectivos de las dependencias del mismo concejo, como **ALCALDES DE MESTA, DE APELACION, ENTREGADORES, CUADRILLA**, etc.

CONCEPCION. Version de *concepcio*, del verbo latino *concipio*, concebir. En la reproduccion del ser viviente, espresa el momento, en que empieza á existir en el seno materno.

Para sus fines y efectos, el derecho tiene precision de determinar alguna vez este momento, y, sin embargo, ni aun la ciencia ha podido todavia, ni podrá nunca, determinarlo *á priori* en caso concreto, con evidencia física, y matemática. La ciencia no ha podido aun, ni nunca podrá formar juicio en dicho caso, sino *á posteriori*, por deduccion, por los efectos. La práctica y la observacion han dado á conocer el período natural de la gestacion, y por esta, para la ciencia y la legislacion, para fines sociales, en las graves cuestiones de familia y de intereses sucesorios, en cuestiones de honra personal y familiar, el parto determina al efecto la concepcion.

Y aun en esta forma ¡cuánta duda y racional vacilacion! En vez de ser decisivo, por ejemplo, el testimonio de la madre, ella misma equivoca con frecuencia, no solo el tiempo de su gestacion; sino aun este mismo estado. Por otra parte, la observacion ha hecho adoptar, como término ordinario de la gestacion, el de nueve meses: pero ¿quién demostraria, ni quién se ha atrevido á asegurar, que no sea natural el parto, aunque no ordinario, á los diez, once y aun catorce?

Y bien: segun la ley 11 de Toro, es hijo natural aquel, cuyos padres, al tiempo de la *concepcion* ó *del parto*, podian casar justamente, y sin dispensacion.

Conocidos son, además, los derechos y el favor que la ley dispensa al *póstumo*. Preciso es, para que éste sea reconocido como tal, que la concepcion del mismo pueda referirse con certeza legal al tiempo del matrimonio, de que se supone proceder. Pero se le objeta que ha nacido á los diez meses, á los doce, y aun catorce de fallecido el que reputa su padre: ¿cómo se determina la concepcion en este grave caso? ¿Cómo se salva la honra de su madre? En estas cuestiones el caso es de tribunales, ayudados de la ciencia, y como radicalmente facultativo y peculiar de ésta, cualquiera que sea la certeza que la razon humana pueda atribuir al dictámen facultativo, el juzgador debe procurarlo, con todas las garantías posibles de imparcialidad, acierto y seguridad; pero á él deberá acomodar su fallo. La práctica tiene determinados además los medios y los centros facultativos, con cuyo auxilio ha de procurarse, en cuyo camino nunca será escesiva la mas esquisita diligencia. En resúmen, el caso es de tribunales sobre el testimonio de la ciencia profesional, así en el caso del póstumo, como el del hijo natural, ya el parto se retarde más del término ordinario, ya se anticipe.

CONCERTADOR DE PRIVILEGIOS. Véase PRIVILEGIOS.

CONCESSUM. En la espedicion de bulas y despachos pontificios, es fórmula técnica y parte de lo que se llama *signatura*, así en el órden de gracia, como en el de práctica, y dá á conocer que no ha firmado el Papa; sino el cardenal delegado. Véase SIGNATURA.

CONCIENCIA. Del latin *conscientia*, con la misma doble significacion, moral y sicológica; esto es, juicio sobre la moralidad de los actos individuales; y advertencia, ó conocimiento de lo que se hace. En el primer sentido obrar con conciencia es conformar el hombre sus acciones con la justicia y el deber; en el segundo, es obrar con conocimiento, para poder merecer ó desmerecer, para poder responder de sus actos; doble criterio, moral y sicológico, sin el que, y sin completo conocimiento del corazon humano, jamás puede ser bien juzgado el hombre, lo cual revela cuán sério estudio merecen del legislador y del juzgador.

En algunas disposiciones testamentarias, se hace el encargo á los herederos ó albaceas, de *descargar la conciencia* del testador, lo cual, segun lo dicho, equivale á satisfacer las deudas, y demás deberes morales y de justicia que haya dejado pendientes.

Sabido es que el derecho hace descansar sus determinaciones, y la justicia moral y política sus aplicaciones, sobre la doctrina y criterio sicológico de que el hombre no merece ni desmerece sino por hechos ejecutados con conciencia, esto es, con advertencia de parte del entendimiento, y deliberacion de parte de la voluntad. Véase ACTOS HUMANOS y ACTOS DE HOMBRE.

CONCILIÁBULO. Del latin *conciliabulum*. *Concilio* y *conciliábulo* fueron, en efecto, en su orígen denominaciones civiles de las costumbres y legislacion romana. Eran y suenan siempre, con relacion á su orígen, *junta*, *reunion*, *congregacion* deliberante para fines de la colectividad. Se llamaban *concilium* las reuniones numerosas, pero á que no concurrian todas las clases, pues en este caso se denominaban *comicios*. En tal concepto, *conciliabulum* era como diminutivo de *concilium*, pues siempre significaba reunion menor, como si se digera concilio pequeño ó en reducido número: analogía que siempre ha conservado, aun en lo canónico, como veremos.

En el año 589 de la fundacion de Roma, en la necesidad de clasificar y diferenciar los diversos centros de la poblacion y su respectiva representacion administrativa, como su calidad y derechos, se publicó al efecto, siendo tribuno de la plebe Cayo Mamilio, la llamada por eso Ley Mamilia (*De finibus agrorum*). Esponiendo su testo dice el jurisconsulto Paulo: *quæ colonia, hac lege deducta, quodve municipium, præfectura, forum, conciliabulum constitutum erit* (Lib. 4.°, Sentent. tít. 6, §. 2). Por donde se ve que conciliábulo era el último de los centros de poblacion y la menor de las reuniones, y podríamos considerarlas entre nosotros como *aldeas* y pequeños ayuntamientos rurales. Segun Brisonio, los conciliábulos eran reuniones de hombres en los campos, las cuales no gozaban del derecho de municipio, colonia ni prefectura; aunque tales aldeas (*vici*) gozaban del derecho de mercado ó feria, y en ellas se reunian alguna vez *conventos jurídicos*. (Heinecio, *De jure italico*, lib. 2.°, cap. 15.)

De aquí, desde los primeros siglos de la Iglesia católica, tomó ésta su denominacion de concilio y conciliábulo, en un principio ambas en buen sentido. San Gerónimo á los unidos en Cristo llamó *Christi conciliabula* (*Epist. ad Gerontiam*), y *conciliabula martyrum* á los santuarios ó capillas consagradas á los mártires. Hay que repetir que en los primeros tiempos se aplicaban tambien las voces *concilio*, *conciliábulo* y *conventículo* á los templos y capillas en que se reunian los cristianos.

Despues, aunque multiplicadas las asambleas cristianas deliberativas, mientras se subordinaban á legítima autoridad, se denominaban tambien todas *concilios*; pero cuando ya tuvieron lugar algunas reuniones eclesiásticas, no convocadas ó no presididas por autoridad legítima, éstas empezaron á denominarse, y continúan siempre en concepto de-

presivo y de ilegalidad, *conciliábulos*: cuando eran heréticas ó cismáticas, alguna vez en el uso y valor entendido, se les llama tambien conciliábulos; pero mas comunmente y con mas propiedad técnica, *conventículos*.

No es fácil determinar, de un modo preciso, y exento de controversia, el número de conciliábulos, que merecen este nombre en la historia eclesiástica. Nace esta dificultad de la discordancia, que sobre este punto se nota en los historiadores, colectores de concilios, y tratadistas, en razon, ya de las escuelas á que pertenecen, ya de la mayor ó menor veracidad y autenticidad de los datos, que les sirvieron de base, no designando todos ellos unos mismos conciliábulos, y discrepando en cuanto á las fechas de algunos. De los celebrados por los *arrianos, novacianos, donatistas, nestorianos, eutiquianos* y demás sectarios, no hay, ni puede haber duda, por lo notable y notorio de su ilegitimidad en la historia: y tales son el de Milán, sentenciando á injusto destierro á San Atanasio, por calumnia de los arrianos; el de Rimini, convocado por el emperador Constancio, para hacer triunfar al arrianismo, y el de Efeso, presidido por Dioscoro, y con encargo de Crisapho, ministro del emperador Teodosio, para favorecer el error de Eutiques.

Acerca de los demás, celebrados en los siglos siguientes por herejes ó cismáticos, ó contra las reglas de la verdadera disciplina, estos tres conceptos deben servir de guia para calificarlos de tales, lo cual no puede hacerse sin un detenido exámen de las asamblas, colaciones, coloquios, conferencias, conventos, sínodos y demás reuniones de carácter eclesiástico, que, versando sobre puntos de dogma ó de disciplina, menciona la historia de la iglesia universal, y no se comprenden en el número de los Concilios generales ó ecuménicos de indudable legitimidad.

Entre los conciliábulos es señalado, por su grandeza, el de Efeso, de 449, comunmente calificado por ello de *latrocinium ephesinum*. Fué reunido y presidido por Dioscoro, patriarca de Alejandría, con los eutiquianos: declaró ilegítimo el concilio de Calcedonia, pronunció anatema contra el Papa San Leon, y maltrató á los legados del Papa, y á los obispos que disentian de la doctrina de Eutiques.

Como esplanacion y complemento del presente artículo, consignamos la siguiente nota cronológica de conciliábulos, reconocidos como tales, segun el catálogo que precede al cuerpo del Derecho canónico académico:

Siglo IV.—Sardicense, del año de 347: Ariminense, de 359: Seleuciense, y Constantinopolitano, de id.: Antioqueno I, de 360: Lampsaceno, de 364: el de Caria, ciudad del Peloponeso, en 366: Singedimiro, de id.; y Begariense, de 394.

Siglo V.—Africano, donatista, de 414: Efesino, de 449.

Siglo VI.—De Numidia, en 592.

Siglo VII.—Constantinopolitano, de 639: Idem, de 692: de Aquileya, de 698.

Siglo VIII.—Constantinopolitano, de 712: Idem, de 754: Germánico, de 759.

Siglo IX.—Constantinopolitano I, de 806: Idem II, de 809: Id. III, de 814: de Clonesbovia, de 892: Constantinopolitano, de 858: Id., de 859: Id., de 861: de Metz, de 869: Constantinopolitano, de 879: Romano, de 897.

Siglo X.—Constantinopolitano, de 944: Romano, de 963: Id., de 964: de Reims, de 992.

Siglo XI.—Basileense, de 1061: Erfordiense, de 1073: Wormaciense, de 1076: Papiense, de id.: Briciense, de 1080: Moguntino, de 1085.

Siglo XII.—Papiense, de 1160: de Lodi, en 1161: de Clarendon, en 1164: de Northanstomp, en id.

Siglo XV.—De Aragon, en 1409: de Bourges, en 1438.

Siglo XVI.—De Tours, en 1510: de Pisa, en 1511.

Lo concerniente á la época de la reforma, se reseña en su lugar.

CONCILIACION (ACTO Ó JUICIO DE). Del latin *conciliatio*, del verbo *conciliare*, en el sentido de «componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí;» hacerlos amigos; avenir sus volun-

tades respecto del punto ó cuestion en que estaban en disidencia; ponerlos en paz.

Por la mediacion de un amigo ó de una persona de respeto, se consigue muchas veces la conciliacion de dos ó mas personas, que estaban desavenidas por cuestiones de intereses, de honra, de política, ó de otro órden. A veces llegan tambien los hombres desavenidos á entenderse y á reconciliarse sin la mediacion de nadie, por su propio interés. En todos estos casos hay verdadera *conciliacion*; pero de carácter *privado*, la mas conveniente, sin duda alguna, para terminar de buena fé las cuestiones pendientes y obtener una reconciliacion franca, leal y duradera. Esta clase de conciliacion no está sujeta á fórmulas ni solemnidades especiales, ni en el derecho es designada por ese nombre, por lo cual no puede servir de objeto al presente artículo. Si los interesados convienen en someter sus diferencias al juicio de personas de su confianza, resultará un *compromiso*, y por consecuencia de él un *juicio arbitral* ó *de amigables componedores*; y si se avienen en otros términos, estos indicarán la forma y las consecuencias legales del *convenio* ó *transaccion*. Véanse, por tanto, estos artículos, ó el que corresponda en su caso.

Hay otros actos, llamados de *conciliacion*, no por sus consecuencias, ó por que siempre haya avenencia entre las partes; sino por el objeto á que se dirigen de procurar esa avenencia, aunque no llegue á conseguirse. Con el laudable fin de evitar las fatales consecuencias de los pleitos, la ley impone el deber de intentar la conciliacion, en todos los casos en que el negocio es susceptible de transaccion ó avenencia, antes de llevar la cuestion á los tribunales; y ha conferido á los jueces de paz la mision patriarcal de intervenir en esos actos. A la vez ha ordenado el procedimiento que para ello ha de seguirse, y ha determinado los efectos legales que producen, dándoles fuerza ejecutiva cuando ha habido avenencia, y siendo, en otro caso, un requisito prévio indispensable para la admision de la demanda ó querella. El título de la ley de Enjuiciamiento civil, que trata de esta materia, lleva por epígrafe *De la conciliacion*, y esta especie de conciliacion es la que vamos á esponer en el presente artículo.

De consiguiente, en esta última acepcion concreta, se entiende por *conciliacion* el acto legal de comparecer las partes ante el juez de paz, con el objeto de procurar la avenencia y transaccion del pleito ó querella, que una de ellas trata de entablar contra la otra. Con mas propiedad se dice *intentar la conciliacion*, que es el objeto de esa comparecencia. Al acto en conjunto, ó sea al procedimiento que para ello se emplea, se daba antes el nombre de *juicio de conciliacion*, y tambien *de paz* ó *de avenencia*, por su fin y por su forma, pues habia demanda, contestacion y sentencia. La ley de Enjuiciamiento civil ha limitado la intervencion de los jueces de paz á procurar la avenencia de las partes, sin permitirles dictar la providencia conciliatoria, á que antes estaban obligados; y como en virtud de esta reforma falta al procedimiento uno de los requisitos esenciales del juicio, cual es la sentencia, la propia ley ha suprimido dicha denominacion, dándole la de *actos de conciliacion*, y así se llaman en el dia.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Sec. I. Legislacion española.
Disposiciones anteriores á la ley de Enjuiciamiento civil.
Ley de Enjuiciamiento civil.
Disposiciones posteriores.
Leyes de Indias.
Sec. II. Legislacion estranjera.

SECCION I.

Legislacion española.

DISPOSICIONES ANTERIORES Á LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

CONSTITUCION POLÍTICA DE 1812.

Tít. 5.°, declarado como ley por la de 16 de Setiembre de 1837.

«Artículo 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que demandar por negocios civiles ó por

injurias, deberá presentarse á él con este objeto.

Art. 283. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intencion, y tomará, oido el dictámen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin mas progreso, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decision estrajudicial.

Art. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno.»

LEY DE 3 DE JUNIO DE 1821,
restablecida por la de 27 de Enero de 1837.

«Artículo 1.° En los pleitos civiles ó por injurias, en que sean demandados eclesiásticos ó militares, debe preceder el medio de conciliacion prescrito por la Constitucion, del mismo modo que cuando se demanda á los demás ciudadanos.

Art. 2.° La conciliacion en todos estos casos debe celebrarse con entero arreglo á lo dispuesto en el capítulo 3.° de la ley de 9 de Octubre de 1812 (1) ante los alcaldes constitucionales de cada pueblo, que son los que por la misma Constitucion se hallan encargados de ejercer el oficio de conciliadores, lo cual es y debe entenderse sin perjuicio del fuero que competa al demandado, para que no se le juzgue sino por su juez competente cuando no se concilien las partes.

Art. 3.° Para que se celebre el juicio de conciliacion, no debe preceder peticion por escrito; bastará que se solicite verbalmente para que el alcalde mande citar desde luego al demandado, evitando dilaciones.

Art. 4.° Debe preceder la conciliacion en las causas de divorcio, como meramente civiles; pero no es necesaria en los juicios verbales, ni tampoco en los de concurso á capellanías colativas, ni en otras causas eclesiásticas de la misma clase en que no cabe prévia avenencia de los interesados. En esta última clase se comprenden tambien las causas que interesan á la Hacienda pública, á los pósitos ó propios de los pueblos, á los establecimientos públicos, á los menores, á los privados de la administracion de sus bienes, y á las herencias vacantes.

Art. 5.° No debe preceder el juicio de conciliacion para hacer efectivo el pago de todo género de contribuciones é impuestos, así nacionales como municipales, ni para el de los créditos dimanantes del mismo orígen.

Art. 6.° Tampoco deberá preceder el juicio de conciliacion para intentar los interdictos sumarios y sumarísimos de posesion, el de denuncia de nueva obra, ni para intentar un retracto, ó promover la formacion de inventarios y particion de herencia, ni para otros casos urgentes de igual naturaleza; pero si hubiere de proponerse despues demanda formal que haya de causar juicio contencioso, precederá precisamente el juicio de conciliacion.

Art. 7.° En los juicios de concurso no es necesario el medio de la conciliacion para que los acreedores puedan repetir sus créditos; pero para pedir judicialmente cualquier ciudadano el pago de una deuda, aunque dimane de escritura pública, se intentará antes dicho juicio de conciliacion, y no aviniéndose las partes, se procederá acto contínuo al embargo de bienes, para evitar todo perjuicio al acreedor.

Art. 8.° Lo que quedase resuelto y convenido entre las partes en el juicio de conciliacion, se ejecutará sin escusa ni tergiversacion alguna por el mismo alcalde; y si gozare de fuero privilegiado la persona contra quien deba procederse, lo verificará del mismo modo su juez legítimo en vista de la certificacion que se le presentará de lo resuelto y convenido en el juicio de conciliacion.

Art. 9.° Toda persona demandada á quien cite el alcalde para la conciliacion, está obligada á concurrir ante él para este efecto, si reside en el mismo pueblo. Si no lo hiciese, se le citará segunda vez á costa suya, conminándole el alcalde con una multa de 20 á 100 rs. vn., segun las circunstancias del caso y de la persona; y si aun así no obedeciese, dará el alcalde por terminado el acto, franqueará al demandante certificacion de haberse intentado el medio de conciliacion y de no haber tenido efecto por culpa del demandado; declarará á éste incurso en la multa con que le conminó, y se le exigirá si no tuviese fuero privilegiado; y en el caso de tenerle, pasará certificacion de la condena al juez respectivo para que la exija desde luego, remitiendo su importe al alcalde que la impuso. En las provincias de Ultramar la multa será de un peso fuerte á lo menos, y no podrá esceder de cinco.

Art. 10. En los juicios de conciliacion podrán concurrir las partes, ó personalmente, ó por medio de procurador autorizado con poder especial al efecto; y las multas que se exijan en los casos de que habla el artículo anterior, se destinarán por ahora esclusivamente al alimento de los pobres presos de las cárceles.

Art. 11. Cuando sean demandantes ó demandados el alcalde único, ó todos los de un pueblo, se celebrará la conciliacion ante el regidor primero en órden; y si lo fueren los alcaldes y el ayun-

(1) Esta ley no ha sido restablecida: sus disposiciones sobre este punto eran análogas á las consignadas despues en el Reglamento provisional.

amiento en cuerpo, ejercerá las funciones de conciliador el alcalde del año último; y si se tratase de un negocio de interés comun, se ocurrirá al del pueblo más inmediato que no lo tuviere.

Art. 12. Los alcaldes y demás personas que concurran al juicio de conciliacion, no llevarán por este acto derecho alguno; pero se exigirán 2 rs. vn. á las partes para atender á los gastos indispensables de papel y formacion de libros donde deben estenderse dichos juicios.»

REGLAMENTO PROVIS. PARA LA ADMINIST. DE JUSTICIA de 26 de Setiembre de 1835.

«Artículo 21. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion y que esta no ha tenido efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil ni ejecutiva sobre negocio susceptible de ser completamente terminado por avenencia de las partes; ni tampoco querella alguna sobre meras injurias, de aquellas en que sin detrimento de la justicia se repara la ofensa con sola la condonacion del ofendido.

Esceptúanse de la necesidad de que se intente antes la conciliacion:

1.° Las causas que interesen á la Real hacienda, á los pósitos ó á los propios de los pueblos, á los demás fondos y establecimientos públicos, á herencias vacantes ó á menores de edad, ó á los que se hallen privados de la administracion de sus bienes.

2.° Los negocios de que se debe conocer en juicio verbal, los interdictos posesorios, los juicios de concurso, las denuncias de nueva obra, los recursos para intentar algun retracto ó tanteo, ó la retencion de alguna gracia, ó para pedir la formacion de inventario ó particion de bienes, ó para otros casos urgentes de semejante naturaleza. Pero si hubiere de proponerse despues demanda formal que haya de causar juicio contencioso por escrito, deberá preceder precisamente el acto de conciliacion.

Art. 22. En cada pueblo el alcalde y los tenientes de alcalde ejercerán el oficio de jueces de paz ó conciliadores: y ante cualquiera de ellos deberá presentarse todo el que tuviere que demandar á otro por negocio civil, ó por injurias que no se comprendan en las escepciones del artículo precedente.

Art. 23. El juez de paz, con dos hombres buenos nombrados uno por cada parte, pero sin necesidad de que asista escribano, las oirá á ambas personalmente, ó representadas por apoderados con poder bastante; se enterará de las razones que aleguen, y oido el dictámen de los dos asociados, dará dentro de cuatro dias, á lo más, la providencia de conciliacion que le parezca más propia para terminar el juicio; la cual, con espresion de si las partes se conforman ó no, se asentará en un libro que debe llevar dicho juez con el título de *juicios de paz*, firmando él, los hombres buenos y los interesados si supieren, y se darán á éstos las certificaciones que pidan.

Art. 24. La providencia del juez de paz terminará efectivamente el litigio si las partes se aquietaren con ella, en cuyo caso la hará aquel llevar á efecto sin escusa ni tergiversacion alguna.

Art. 25. Si las partes no se conformaren, todavía el juez de paz las exhortará á que por el bien de ellas mismas comprometan su diferencia en árbitros ó mejor en amigables componedores, y lo hará anotar en el libro, con espresion de si se convienen ó no los interesados. Si tampoco en esto se convinieren, dará al que la pida una certificacion de haberse intentado el medio de la conciliacion, y de que no se conformaron las partes ni se avinieron á un compromiso.

Art. 26. Toda persona demandada á quien cite un juez de paz para la conciliacion, está obligada á concurrir ante él para este efecto, ó personalmente, ó por medio de apoderado con poder bastante; y si residiere en otro pueblo, la citará el juez de paz por medio de oficio á la justicia respectiva, señalando el término que sea suficiente.

Cuando el citado no cumpliere, se le citará segunda vez á costa suya, conminándole el juez de paz con una multa de 20 á 100 rs. de vn., segun las circunstancias del caso y de la persona, y si aun así no obedeciese, dará dicho juez por terminado el acto, franqueará al demandante certificacion de haberse intentado el medio de la conciliacion, y de no haber tenido efecto por culpa del demandado, y declarando á éste incurso en la multa, se la exigirá ó hará exigir desde luego con la aplicacion ordinaria.

En las provincias de Ultramar podrá ser doble la multa.

Art. 27. Si la demanda ante el juez de paz fuere sobre retencion de efectos de un deudor que intente sustraerlos, ó sobre algun otro punto de igual urgencia, y el actor pidiere á dicho juez que desde luego provea provisionalmente para evitar los perjuicios de la dilacion, lo hará éste así sin retraso, y procederá inmediatamente al juicio de paz.

Art. 28. Cuando sean demandantes ó demandados los mismos jueces de paz, y no haya en el pueblo otro que tenga este carácter, hará las veces de juez de paz el regidor que primero siga en órden; y si fuere demandado ó demandante el ayuntamiento en cuerpo, se ocurrirá para la conciliacion al juez de paz del pueblo mas inmediato.

Art. 29. Los jueces de paz y las demás personas que concurran á este juicio, no llevarán por él derecho alguno; pero para atender al necesario gasto de libro y escribiente, se podrán exigir dos

reales vellon á cada parte que no sea pobre de solemnidad, doblándose la suma en Ultramar.

Art. 30. Los jueces de paz, penetrándose de la importancia de sus funciones y de lo mucho que interesa el que se eviten cuanto sea posible los pleitos y disensiones entre los ciudadanos, pondrán la mayor eficacia en conciliar á los que se presenten ante ellos; teniendo entendido que mientras mas litigios y querellas corten, mayor será el servicio que hagan al Estado, y mayor el mérito que contraigan á los ojos del Gobierno.»

ÓRDEN DEL REGENTE DE 12 DE JULIO DE 1841.

«Enterado el Regente del reino del abuso con que por papeletas impresas se escita á los alcaldes constitucionales para la celebracion de juicios de conciliacion, sin cuyo requisito se niegan á verificarlos, se ha servido mandar S. A., que esa Audiencia vigile para que no vuelva á cometerse tal abuso ni otro alguno de semejante ú otra clase, á cuyo efecto el tribunal, por los medios que estén en sus facultades, haga entender á los alcaldes constitucionales de los pueblos del distrito, la obligacion estrecha en que están de proceder desde luego á celebrar los juicios de conciliacion reclamados por los interesados, con arreglo á la ley, y sin necesidad de escitacion del juez del partido, sobre cuyo estremo deberá tambien celar cuidadosamente esa Audiencia.»

REGLAMENTO DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA,

aprobado por Real decreto de 1.° de Mayo de 1844.

«Art. 104. Si los alcaldes y sus tenientes, como jueces de paz, llevasen á efecto las providencias con que las partes se hubiesen aquietado, segun dispone el artículo 24 de dicho reglamento (el de 26 de Setiembre de 1835), tan pronto como se suscite tercería ú otra cuestion agena de la convenida en el juicio de paz, ó bien sea necesario conocimiento del derecho para su ejecucion, remitirán las diligencias á los juzgados respectivos, y estos las continuarán con arreglo á las leyes.»

REAL ÓRDEN DE 1.° DE ENERO DE 1847.

«S. M. la Reina se ha enterado de la comunicacion de V. S. fecha 9 de Noviembre anterior, consultando si en los asuntos de que conoce el consejo provincial debe preceder el juicio de conciliacion;..... con presencia de lo dispuesto en el reglamento provisional para la administracion de justicia....., se ha servido declarar, que no es necesario intentar el juicio de la conciliacion en los asuntos de que conocen los consejos provinciales.»

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Aprobada por Real decreto con fuerza de ley de 5 de Octubre de 1855.

TÍTULO VI.—*De la conciliacion.*

«Artículo 201. Antes de promover un juicio debe intentarse la conciliacion ante el juez de paz competente.

Esceptúanse:

1.° Los juicios verbales.

2.° Los juicios ejecutivos y sus incidencias.

3.° Los interdictos.

4.° Los juicios de sucesion testamentaria, abintestato, vincular, y en capellanías colativas, ó sus bienes é incidencias de estos juicios.

5.° Los de concurso de acreedores y sus incidencias.

6.° Los juicios en que estén interesados la Hacienda pública, los pósitos, propios, comunes ó cualquiera otra clase de bienes de establecimientos públicos, de pueblos, de provincias ó del Estado.

7.° Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados.

8.° Los juicios contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que residan fuera del territorio de la Audiencia á que corresponda el juzgado en que deba entablarse la demanda.

Art. 202. No será necesario el acto de la conciliacion para la interposicion de las demandas de tanteo, de retracto y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se exigirá el acto de la conciliacion, ó la certificacion de haberse intentado sin efecto.

Art. 203. El juez no admitirá demanda á que no acompañe certificacion del acto de conciliacion ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho corresponda. Serán, no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salva la responsabilidad en que el juez haya incurrido; pero se procederá á la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note su falta.

Art. 204. Fuera de los casos de sumision espresa ó tácita de que hablan los artículos 3.° y 4.° de esta ley, el juez de paz competente será á prevencion el del domicilio del demandado, ó el de su residencia.

Art. 205. El que intente el acto de la conciliacion, acudirá al juez de paz, presentando dos papeletas firmadas por él, ó por un testigo á su ruego, si no pudiera firmar.

En estas papeletas se espresará:

El nombre, profesion y domicilio del demandante y demandado.

La pretension que se deduzca.

La fecha en que se presentan en el juzgado.

Art. 206. El juez de paz, en el dia en que se presente el demandante, ó en el siguiente hábil, mandará citar al demandado, señalando el dia y hora en que ha de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique á la brevedad posible.

Entre la citacion y la comparecencia deberán mediar al menos veinte y cuatro horas.

Por justas causas podrá el juez de paz reducir este término.

Art. 207. El secretario del juzgado, ó la persona que éste delegue, notificará la providencia de citacion al demandado, arreglándose á lo que se previene en los arts. 21 y 22 de esta ley respecto á todas las notificaciones; pero en lugar de la copia de la providencia, le entregará una de las papeletas que haya presentado el demandante, en la que además se espresarán el juez de paz que manda citar, y el dia, hora y lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que se archivará despues, firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á su ruego, si no pudiere.

Art. 208. Los ausentes del pueblo en que se solicite la conciliacion, serán llamados por medio de oficio dirigido al juez de paz del lugar en que residan.

En el oficio se insertará íntegramente el contenido de la papeleta presentada por el demandante.

El juez de paz del pueblo de la residencia del demandado devolverá diligenciado el oficio, el cual se archivará con las demás papeletas en los términos que previene el artículo anterior.

Art. 209. Los demandantes y demandados están obligados á comparecer en el dia y hora señalados. Si alguno de ellos no lo hiciere, ni manifestare causa justa para no concurrir, se dará el acto por terminado, condenándole en las costas, y en una multa de seis á sesenta reales, que hará efectivos el juez de paz.

Art. 210. Tanto los demandantes como los demandados se presentarán acompañados cada cual de un hombre bueno.

Art. 211. Pueden ser hombres buenos en los actos de conciliacion, todos los españoles que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 212. El acto de conciliacion se celebrará en la forma siguiente:

Comenzará el demandante esponiendo su reclamacion, y manifestando los fundamentos en que la apoya.

Contestará el demandado lo que crea conveniente, y podrá hacer tambien manifestacion de cualquier documento en que funde sus escepciones.

Despues de la contestacion, podrán los interesados replicar y contrareplicar, si quisieren.

Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres buenos y el juez de paz procurarán avenirlos. Si no pudieren conseguirlo, se dará el acto por terminado.

Art. 213. Se estenderá sucintamente el acta de conciliacion en un libro que llevará el secretario del juzgado de paz. Esta acta será firmada por todos los concurrentes. Por los que no sepan, ó no puedan firmar, lo hará un testigo á su ruego.

Art. 214. En el libro de que habla el artículo anterior se hará constar por diligencia, que suscribirán el juez de paz y los concurrentes, haberse dado por terminado el acto de la conciliacion á que no hayan concurrido los interesados ó alguno de ellos, y la entidad de la multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia.

Art. 215. Se dará certificacion al interesado ó interesados que la pidan del acta de conciliacion, ó de no haber tenido efecto y dádose por terminado en los casos de no comparecer los interesados ó alguno de ellos.

Art. 216. Los gastos que ocasione la conciliacion serán de cuenta del que la promueva: los de las certificaciones, del que las pidiere.

Art. 217. Contra lo convenido en el acto de conciliacion solo se admitirá la demanda de nulidad. Procederá ésta únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos.

Deberá interponerse ante el juez de primera instancia del partido dentro de los ocho dias siguientes al de la celebracion del acto.

Esta demanda seguirá la tramitacion del juicio ordinario.

Art. 218. Lo convenido en el acto de conciliacion se llevará á efecto por el juez de paz, si no escediere de la cantidad prefijada para los juicios verbales.

Si escediere de esta cantidad, por el juez de primera instancia, de la manera y en la forma prevenidas para la ejecucion de las sentencias.

Art. 219. En los casos en que con arreglo al artículo anterior, corresponda al juez de paz la ejecucion de lo convenido, éste suspenderá las actuaciones, y las remitirá al juez de primera instancia, siempre que por un tercero se suscite alguna cuestion de derecho.

Art. 220. De las providencias que dicte el juez de paz en la ejecucion de lo convenido, habrá apelacion al juzgado de primera instancia sin ulterior recurso, y de las que dicte éste en los negocios de su competencia, á la Audiencia del territorio: en uno y otro caso dentro de tercero dia.»

DISPOSICIONES POSTERIORES.

REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBRE DE 1855.

«Art. 11. Los secretarios y porteros de los juzgados de paz percibirán los derechos estable-

cidos en los aranceles vigentes, ó los que se establezcan en lo sucesivo, para los actos en que funcionan como tales.....

Art. 12. Los secretarios son responsables de la conservacion de los libros en que se asienten los actos de conciliacion.....

Art. 13. Al fin de cada bienio deberán hacer entrega de dichos libros en los juzgados de primera instancia, recojiendo resguardo, sin el cual no podrán eximirse de la responsabilidad declarada en el artículo anterior.»

CIRCULAR DE LA DIRECCION DE RENTAS ESTANCADAS

de 20 de Mayo de 1858.

Se declara, que no deben estenderse en papel sellado las papeletas que se presentan en los juzgados de paz pidiendo juicios de conciliacion.

REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBRE DE 1858.

«Artículo 10. En el caso de que un juez de paz haya de demandar á uno de sus suplentes, ó vice-versa, á juicio de conciliacion ó verbal, y no hubiere más jueces de paz en el pueblo, corresponderá al otro suplente el conocimiento del asunto, y en su defecto, al alcalde y los tenientes del mismo, con sujecion á las reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil. Donde hubiere mas de un juez de paz, deberá el demandante acudir, primero, al mas antiguo de la misma clase, segun el órden numérico; despues, á los suplentes, en la misma forma, y por último á los alcaldes ó tenientes.»

ARANCELES JUDICIALES MODIFICADOS POR REAL DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1860.

«Art. 568. Por la providencia señalando dia y hora para el acto de conciliacion y notificacion al interesado, llevará el secretario 2 reales.

Art. 569. Por la citacion dentro de la poblacion, llevará 2 reales.

Si hubiere de espedirse oficio por estar el demandado fuera de la poblacion, llevará 2 reales.

Art. 570. Por la comparecencia y estension en el libro del acta de la conciliacion, llevará 10 reales.

Art. 571. Por cada certificacion del acta, 4 reales.

Art. 572. Por la asistencia tendrá el portero 4 reales.

Art. 582. Por las diligencias de ejecucion de lo convenido en los juicios de conciliacion..... percibirán los secretarios las dos terceras partes de los derechos asignados á los escribanos de juzgado, y los porteros las dos terceras partes de los que correspondan á los alguaciles.»

REGLAMENTO GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA LEY HIPOTECARIA, APROBADO POR REAL DECRETO

de 21 de Junio de 1861.

«Art. 8.° Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la Ley, los que sirviendo de títulos al dominio ó derecho real, estén espedidos por autoridad competente para darlos, y deban hacer fé por sí sólos. A este número pertenecen, entre otros..... las certificaciones de los actos de conciliacion..... en que por convenio de las partes, se constituya algun derecho real sobre bienes determinados (1).»

REAL DECRETO DE 12 DE SETIEMBRE DE 1861.

Al determinar el *papel sellado* que ha de emplearse en los documentos públicos, despues de establecer en el art. 6.° la escala gradual, segun la cuantía del asunto, para el pliego 1.° de toda copia de escritura, que tenga por objeto cantidad ó cosa valuable, se ordena:

«Art. 7.° Llevarán igualmente sello de precio proporcional (2) con arreglo al artículo precedente:....

3.° Las certificaciones de actas de conciliacion, cuando resulte avenencia.

Art. 9.°..... Las certificaciones de conciliacion en que haya avenencia, que versen sobre objetos no valuables, se estenderán en papel del sello de 32 reales.

Art. 28. Se usará papel (del sello judicial) de 4 reales:. ..

2.° En las actas de los juicios de conciliacion, é igualmente en las certificaciones que de ellas se libren, cuando no resulte avenencia.»

REAL ÓRDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1861.

«Habiendo significado por el Ministerio de Hacienda á este de Gracia y Justicia la necesidad de que se adopten las medidas oportunas á fin de evitar falsas cesiones de créditos de la Deuda del personal que suelen verificarse, y vienen á redundar en daño de los legítimos intereses de la Ha-

(1) Esta segunda parte, relativa á las certificaciones de los actos de conciliacion, ha sido suprimida en igual artículo del propio Reglamento, reformado por decreto de 29 de Octubre de 1870; pero en el art. 3.° de la ley Hipotecaria reformada, de 21 de Diciembre de 1869, se ha hecho la adicion, de que son auténticos, para el efecto de que puedan ser inscritos, los documentos espedidos *por autoridad judicial*, en cuya categoría están comprendidos los jueces de paz, ó jueces municipales, como se llaman hoy.

(2) Tan solo en el primer pliego, y los demás serán de dos reales, como en las copias de escrituras. (Art. 52 de la instruc. de 26 de Octubre de 1861, sobre papel sellado.)

cienda y de los particulares, la Reina (Q. D. G.), enterada del espediente con tal motivo instruido, y de conformidad con lo espuesto por el Supremo Tribunal de Justicia, se ha servido mandar se observen las reglas siguientes:

1.ª En los actos de conciliacion y juicios verbales en que se haga cesion de créditos de la Deuda del personal para pago de deudas ó por otro motivo, y asistiesen personalmente á ellos los interesados, se espresará en el acta, que el juez de paz ó el secretario conocen á las partes, señaladamente al cedente, si mediase esta circunstancia.

2.ª Cuando el juez de paz ó el secretario no tuviesen el conocimiento de que habla la regla anterior, se exigirá la comprobacion de la identidad de las personas con dos testigos conocidos, que tambien firmarán el acta del juicio.

3.ª Si las partes estuviesen representadas por apoderados, deberán estos presentar el poder original ó primera copia, que quedará unida al acta ó libro de juicios correspondiente, sin que pueda admitirse testimonio de aquel documento.

4.ª Respecto al conocimiento ó identidad de las personas de los apoderados, se llenarán las mismas formalidades establecidas en las reglas 1.ª y 2.ª»

REAL ÓRDEN DE 20 DE JUNIO DE 1863.

Se adicionan provisionalmente los aranceles judiciales en la parte relativa á los derechos que pueden percibir los procuradores, y respecto de los actos de conciliacion se dispone en el art. 13, que por asistencia á dichos actos, cuando á ellos concurriere el procurador, llevará por cada audiencia 20 reales.

LEY DE 25 DE JUNIO DE 1867.

Reforma varios artículos de la ley de Enjuiciamiento civil relativos al juicio de desaucio, y en la que se hace del 639, se ordena que se admitirán las demandas de desaucio sin que preceda acto de conciliacion.

REAL ÓRDEN DE 13 DE SETIEMBRE DE 1867.

Se declara, «que los certificados de los actos de conciliacion no son documentos bastantes para inscribir las hipotecas voluntarias convenidas en dichos actos, siendo indispensable para ello que la constitucion de tales hipotecas se verifique en escritura pública.»

REAL ÓRDEN DE 17 DE FEBRERO DE 1868.

.....«Oidos el Consejo de Estado en pleno y el Tribunal supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien S. M. resolver (*por el Ministerio de la Guerra*), de conformidad con el Tribunal, lo siguiente:

1.ª No siendo el acto de paz ó de conciliacion un verdadero juicio, sino simplemente un acto solemne, cuyo objeto es, como medida de interés público, evitar los pleitos por un medio estrajudicial, el cual en nada perjudica á la integridad del fuero y jurisdiccion militar consiguiente á él; todo militar ó aforado de guerra está obligado á comparecer ante el juez de paz cuando sea citado á juicio de conciliacion, con tal de que la citacion se verifique por conducto de la autoridad militar de que dependa el aforado de guerra citado, que dará la órden oportuna sin pérdida de momento para su comparecencia ante el juzgado de paz, de conformidad con lo prevenido para casos análogos en Real órden de 3 de Febrero de 1857, ó manifestará en contestacion el impedimento que pueda haber, por razones preferentes del servicio, para que lo verifique en el dia y hora designados en la citacion.

2.ª Cuando la ejecucion de lo convenido en el acto de conciliacion celebrado ante el juez de paz requiera que haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, es propia y privativa dicha ejecucion de la jurisdiccion militar, segun está prevenido por punto general para toda citacion, emplazamiento, venta de bienes, pago de deudas y demás diligencias de apremio contra aforados de guerra, por la real cédula de 15 de Agosto de 1799, y como respecto á la ejecucion de los juicios conciliatorios se encuentra esplícitamente declarado, en sostenimiento y confirmacion del fuero de guerra, por el art. 8.º de la ley de 18 de Marzo de 1821, restablecida en toda su fuerza y vigor por la de 25 de Enero de 1837.

3.ª Prescribiéndose en esta que la ejecucion de lo convenido en juicio de conciliacion, cuando haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, sea propia y privativa del juez militar competente, que lo es el capitan general; y teniendo en consideracion que si fuere la via de apremio una materia de justicia y no meramente gubernativa, no puede dicho capitan general acordar providencia judicial alguna sino en su juzgado de guerra, con dictámen y bajo la responsabilidad de su auditor, con arreglo á la real órden de 29 de Enero de 1804, en consecuencia de lo prevenido en la disposicion anterior, estará obligado el litigante que pretenda la ejecucion de lo convenido á ocurrir con instancia acompañada de certificacion del juicio de conciliacion al capitan general de que dependa el aforado de guerra, á fin de que, pasada á su juzgado, se le dé con acuerdo de su auditor y por ante el escribano de guerra al juicio de apremio la tramitacion que corresponda con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil, hasta la completa ultimacion del asunto.

4.° Lo dispuesto en las prescripciones precedentes no deroga las facultades que por la Real órden de 23 de Julio de 1855 competen á los directores generales de las armas, capitanes generales, gobernadores militares y jefes de los cuerpos para decretar gubernativamente la retencion de la parte correspondiente del sueldo á los militares y aforados de guerra que de ellos dependan, cuando reclamado el pago de una deuda por la via gubernativa, sin que haya mediado juicio de conciliacion ante el juez de paz, y oido el militar ó aforado de guerra deudor, hubiere éste reconocido la legitimidad del crédito y sometidose á su pago con la retencion de la parte correspondiente de su sueldo ó haber desde la fecha del decreto de retencion.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE SETIEMBRE DE 1868.

«La Reina (q. D. g.) en vista del espediente instruido en esa Direccion g neral (de rentas estancadas y loterías) con motivo de un oficio de la administracion de Hacienda de las islas Baleares, en que consulta si las actas de los juicios de conciliacion deben estenderse unas á continuacion de otras, ó sea en unos mismos pliegos, y si este sistema, seguido en los juzgados de paz de aquella provincia, constituye una infraccion de ley que haya de penarse;....

S. M., conformándose con lo informado por la Asesoría, se ha servido disponer que las actas de que se trata han de estenderse en pliegos distintos, eximiendo de toda pena por las faltas que hasta ahora hayan podido cometerse.»

LEY PROVIS. SOBRE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL, de 15 de Setiembre de 1870.

«Art. 270. Corresponderá á los jueces municipales, en materia civil:

1.° Intervenir en la celebracion de los actos de conciliacion.....

Art. 300. Los jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizar los actos de conciliacion que ante ellos se promuevan, en los casos que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos.

En las poblaciones en que hubiere más de un juez municipal, el primero por cuya órden se haga la citacion será el competente.

Art. 301. Promoviéndose cuestion de competencia ó de recusacion del juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y con certificacion en que conste, podrá el actor entablar la demanda ó querella que corresponda.»

LEYES DE INDIAS.

REAL ORDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1835.

Se comunicó á las Audiencias de Ultramar, para su cumplimiento, el *Reglamento provisional para la administracion de justicia* de la misma fecha, cuyas disposiciones sobre juicios de conciliacion se han insertado anteriormente.

REGLAMENTO PARA LOS JUICIOS DE CONCILIACION, de 21 de Febrero de 1853 (1)

«Art. 1.° Los Alcaldes ordinarios en los pueblos de su residencia y los capitanes de partido y sus sustitutos en los partidos rurales, tendrán á su cargo esclusivamente los juicios de paz ó conciliacion.

Art. 2.° Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion y que no ha tenido efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil ó mercantil, ordinaria ó ejecutiva, de tercería, de divorcio y de estupro simple, siendo el negocio susceptible de ser completamente terminado por avenencia de las partes, ni tampoco querella alguna sobre meras injurias de aquellas en que, sin detrimento de la justicia, se repara la ofensa con solo la condonacion del ofendido, como son las palabras llamadas de la ley.

Art. 3.° Esceptúanse del acto de conciliacion: 1.° Los asuntos que deben decidirse en juicio verbal 2.° Los de Real Hacienda. 3.° Los de propios, establecimientos y fondos públicos. 4.° Los de concurso á capellanías colativas y otras causas eclesiásticas de la misma clase. 5.° Los que interesan á menores de edad ó personas privadas de la administracion de sus bienes. 6.° Los de ausentes, cuyo paradero se ignore, y no hayan dejado apoderados con facultades para transigir. 7.° Los de herencias vacantes. 8.° Los interdictos posesorios. 9.° Los juicios de concurso. 10. Las denuncias de nueva obra. 11. Los recursos de retractos y tanteos. 12. Los de inventarios y particion de bienes, testamentarías y abintestatos 13. Los de retencion de alguna gracia. 14. Los demás asuntos urgentes de igual naturaleza.

Art. 4.° Si respecto de los asuntos espresados

(1) Este reglamento se circuló de Real órden para su cumplimiento solamente á las Audiencias de la isla de Cuba y á la de Puerto-Rico. Por *auto acordado* de esta última, de 29 de Enero de 1855, se declaró que debia observarse tambien en la isla de Vieques, sin perjuicio del de 31 de Mayo de 1850, que regia en aquella colonia para la administracion de justicia en general, por el cual se confirió al gobernador de la misma el cargo de juez de paz, y á quien se comunicó por el Gobernador capitan general de Puerto-Rico dicho auto acordado, para su cumplimiento, segun éste lo participó al regente de la Audiencia en 15 de Julio de 1850.

en el punto 7.° y siguientes del artículo anterior se hubiese de proponer despues demanda formal que haya de causar juicio contencioso por escrito, deberá preceder á ella el acto de conciliacion.

Art. 5.° El conciliador, sin asesor ni escribano, pero asistido de los hombres buenos, que no necesitan ser letrados, nombrados uno por cada parte, las oirá personalmente, ó representadas por poder bastante, y enterándose de las razones que aleguen, y oido el dictámen de los dos asociados, dará en el acto la providencia de conciliacion que le parezca más conveniente y equitativa para terminar el juicio. Si las partes no se conformasen con ella, las exhortará á que por su propio bien comprometan su diferencia en árbitros, ó mejor en amigables componedores. De todo se hará mencion en una sola acta, que se estenderá en el libro, no olvidando anotar si estuvieron ó no conformes con la providencia, ó si nombraron ó no árbitros, firmando el juez de paz con los interesados y los hombres buenos, si supieren, y dando á aquellos las certificaciones que pidan.

Art. 6.° En el mes de Enero de cada año remitirán los conciliadores al juzgado de gobierno ó alcaldía mayor de la cabecera del partido un índice ó estado de todos los juicios celebrados, los cuales habrán estendido sin intervalo en el libro titulado de *Juicios de paz*, que llevarán en la forma que se previene para los juicios verbales.

Art. 7.° La providencia del conciliador terminará definitivamente el litigio, si las partes se aquietasen con ella, en cuyo caso, el juez de paz la hará llevar á efecto sin escusa ni tergiversacion alguna, con sujecion á lo dispuesto en este reglamento.

Art. 8.° Para celebrar el juicio de conciliacion no se necesita solicitud escrita; y el alcalde ó capitan de partido, en su caso, procederán sin dilacion á señalar dia y hora. Toda persona demandada á quien cite un juez de paz para la conciliacion, está obligada á concurrir ante él personalmente ó por apoderado; y si residiere en otro pueblo temporalmente, se oficiará al juez respectivo para que la cite con señalamiento del término que sea suficiente.

Art. 9.° Cuando la persona citada no compareciese, se le citará segunda vez á costa suya, conminándola con la multa de dos á diez pesos, segun las circunstancias del caso y de la persona; y si ni aun así obedeciere, dará el juez de paz por terminado el acto; franqueará al demandante certificacion de haberse intentado el medio de la conciliacion y de no haber tenido efecto por culpa del demandado, y declarando á este incurso en la multa, se la exigirá ó hará exigir desde luego, con la aplicacion ordinaria.

Art. 10. Si la demanda ante el juez de paz fuese sobre retencion de efectos de un deudor que intente sustraerlos, ó sobre algun otro punto de igual urgencia y el actor pidiese á dicho juez que desde luego provea provisionalmente para evitar los perjuicios de la dilacion, podrá éste hacerlo así sin retraso, y se procederá inmediatamente á celebrar el juicio de conciliacion.

Art. 11. Cuando sean demandantes ó demandados los mismos jueces de paz y no haya otro en el pueblo, hará veces de conciliador el regidor primero; y cuando no hubiese ayuntamiento ó sea este cuerpo demandante ó demandado, se ocurrirá al juez de paz del pueblo ó partido más inmediato.

Art. 12. Los conciliadores y las demás personas que concurran á estos juicios, no llevarán derechos ningunos; pero para atender al necesario gasto del libro y escribiente, se podrán exigir dos reales fuertes á cada una de las partes que no sea pobre de solemnidad, y el importe del papel que se consuma en la certificacion.

Art. 13. En el caso de no avenirse las partes en el acto conciliatorio, el alcalde que hubiese intervenido en él, no puede conocer como juez del litigio que sucesivamente entablen las partes sobre el mismo particular.

Art. 14. Cuando la providencia dada por el juez de paz y consentida por las partes tenga por objeto hacer que se pague alguna cantidad, y hubiese trascurrido el término señalado sin que el deudor la satisficiere, procederá aquel por ante escribano al embargo de bienes muebles ó semovientes y raices, si no bastaren los primeros, hasta una suma algo mayor que la que motiva la ejecucion.

Art. 15. Realizado el embargo, se procederá á la tasacion por peritos, nombrados en el acto por el acreedor y deudor, ó por el juez, si estos no lo hicieren, ó fuese necesario elegir un tercero para que dirima la discordia de los elegidos por las partes.

Art. 16. La tasacion se verificará dentro del término más breve posible, asignado por el juez de paz, habida consideracion á la calidad y demás circunstancias de la cosa tasada.

Art. 17. Hecha la tasacion, se señalará dia para el remate, que será el décimo despues de tasada, si fuese una finca rústica ó urbana, y el cuarto, si es mueble ó semoviente; y en los dias intermedios se publicará la subasta en la forma acostumbrada, para que concurran licitadores el dia en que deba verificarse.

Art. 18. Se adjudicará entonces á favor de quien hiciese mejores proposiciones en cantidad y calidad; pero si ninguna de ellas alcanzare á las dos terceras partes del valor de la tasacion, será adjudicada por ellas al acreedor, á cuya instancia se proceda, siempre que no esceda en más de una octava parte del valor del crédito.

Art. 19. Dentro de los tres dias siguientes al

de la subasta, el juez de paz y el escribano que autorice las diligencias, harán la liquidacion de cargas y exigirán del comprador el precio íntegro ó aquella parte del que hubiese ofrecido al contado, entregando lo que sea al acreedor hasta donde su crédito alcance, y el sobrante, si lo hubiere, al deudor, deducidas las costas que se hubiesen devengado.

Art. 20. Si no hubiese habido comprador ni hubiese procedido la adjudicacion porque el valor de las dos terceras partes de la finca fuere superior en mas de una octava parte al del crédito, se procederá á la retasacion y nuevo remate por los mismos medios y en iguales términos que en la tasacion y subastas primeras; y si todavía no hubiese podido enajenarse ni adjudicarse, y la finca admitiese cómoda division, se adjudicará al acreedor por los dos tercios del valor en que se tasare la parte de ella que bastare para el pago del crédito y las costas, que satisfará en tal caso á los interesados; y si no admitiese cómoda division, se entregará al mismo acreedor para que de sus productos cobre el principal, réditos del seis por ciento, contados desde el dia de la entrega, si la providencia consentida no mandase que se le pagaran con anterioridad, y costas devengadas, devolviéndola al dueño por conducto del juez de paz luego que hubiese verificado la cobranza, sin perjuicio del ajuste y aprobacion de cuenta, acerca de lo cual, si no hubiese conformidad, se procederá con arreglo á derecho.

Art. 21. Si la providencia consentida tuviese por objeto mandar que se entregue una cosa mueble ó raiz, ó que se ejecute alguna cosa, el juez de paz, segun las circunstancias, señalará el término más breve que sea posible, para que la cosa se entregue, ó se haga lo prevenido.

Art. 22. Si trascurrido el plazo fijado, no hubiese cumplido el que debe entregar, se verificará la entrega poniendo á aquel á quien debe hacerse, en posesion de la cosa que se entregue por ante escribano, y se estenderá una acta para que siempre conste.

Art. 23. Como las obligaciones de hacer no son ejecutables si el que debe hacerlo se resiste, y por esta razon se convierten en el pago de una cantidad que sirve de indemnizacion al acreedor, cuando despues de vencido el plazo señalado por el juez de paz no se hubiese conseguido que el deudor hiciese aquello á que estaba obligado, se procederá á determinar la cantidad equivalente, si antes no se hubiese verificado y comprendido en la providencia consentida; lo cual procurarán hacer los jueces de paz para evitar las cuestiones que en otro caso pudieran suscitarse.

Art. 24. La cantidad se fijará, si no estuviesen de acuerdo los interesados, por medio de peritos nombrados en la misma forma y dentro de los términos que se espresan en el artículo 15.

Art. 25. Fijada la cantidad, se procederá para exigirla de la manera espuesta respecto al caso en que la providencia consentida tuviese por objeto el pago de alguna suma.

Art. 26. Todas las diligencias que se practiquen á consecuencia de lo prevenido en las anteriores disposiciones, formarán un espediente separado, á cuya cabeza estará una certificacion del juicio de paz en que se dió la providencia que por medio de ella se ejecuta.

Art. 27. Como todas estas actuaciones no exigen conocimiento del derecho, el alcalde procederá sin dictámen de asesor, y no admitirá escritos de ninguna clase. Cuando alguno de los interesados tenga que proponer ó pedir alguna cosa, lo verificará presentándose ante el juez de paz esponiendo verbalmente lo que quiera, y éste lo hará constar por medio de diligencia en el espediente.

Art. 28. Cuando en el discurso de la ejecucion se susciten por los interesados, ó por otros, cuestiones distintas de aquella que fué decidida por el juicio de paz que se ejecuta, tales como las que suelen promoverse sobre tercerías de dominio ó de dote, sobre si es ó no justa y arreglada la tasacion, admision de posturas, tanteos ó retractos, liquidaciones de créditos, deducciones de capitales, censos, y todas las demás que dan lugar á incidentes contenciosos, ya versen sobre puntos de derecho, ó de hecho, se procederá por los jueces de paz en la forma siguiente. Si el valor de la nueva disputa no escediere de la suma de que el juez de paz puede conocer verbalmente, la decidirá él mismo en la forma prevenida para los juicios de esta clase; y si fuese superior, pero no pasase de doscientos pesos, remitirá á los litigantes al juez ordinario del demandado que corresponda, segun la cuantía, para que resuelva tambien verbalmente la cuestion suscitada. Mas si se tratase de una cantidad mayor que la de doscientos pesos, y el asunto fuese susceptible de ser terminado por la avenencia de las partes y no estuviese comprendido en la providencia consentida, se celebrará otro juicio de paz respecto de la nueva cuestion, y si no hubiese acuerdo, se remitirán las diligencias al juez que corresponda para que se resuelva con arreglo á derecho.

Art. 29. En todos los casos de que trata la disposicion que precede, se suspenderá la ejecucion de los juicios de paz hasta que definitivamente se resuelva la cuestion incidental, á no ser en aquella parte de la providencia consentida que pudiera ejecutarse sin perjuicio de ninguno de los interesados.»

REAL CÉDULA DE 30 DE ENERO DE 1855.

«Art. 2.° Los alcaldes ordinarios de las islas de Cuba y Puerto-Rico y los capitanes de partido

de la primera ejercerán como autoridades judiciales las siguientes atribuciones:

1.° Conciliar á los que intenten promover algun litigio, y llevar á efecto lo convenido en el juicio de paz, cualquiera que sea el fuero de los que en él comparezcan. Cuando para llevar á efecto lo convenido en el juicio de paz se susciten cuestiones de derecho, cesarán en su jurisdiccion los jueces locales y remitirán las actuaciones á los ordinarios de partido que sean competentes.

Art. 3.° Los jueces de paz procederán en los actos de conciliacion en los términos y con las formalidades prescritas en el reglamento de 21 de febrero de 1853.

Art. 4.° El juicio de paz y las diligencias que le precedan, se podrán practicar en los dias feriados despues de los divinos oficios; pero las de ejecucion de las providencias consentidas, que tienen ya el carácter de judiciales, se verificarán únicamente en los dias hábiles para administrar justicia.

Art. 113. Los juzgados de fueros especiales que en la actualidad subsisten en las islas de Cuba y Puerto-Rico, sea cualquiera la jurisdiccion á que pertenezcan, observarán puntualmente los reglamentos de 21 de Febrero de 1853 para los juicios de conciliacion, verbales y de menor cuantía.

Art. 114. Para la celebracion de los juicios de paz, y para llevar á efecto las providencias en ellos consentidas, serán siempre competentes los jueces locales de que habla el artículo 2.°, aun sobre los aforados de las jurisdicciones privilegiadas, á menos que se susciten cuestiones de derecho, en cuyo caso remitirán dichos jueces las actuaciones á los del fuero privilegiado que sean competentes.»

REAL DECRETO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1865.

«Art. 1.° El Ministro de Ultramar hará promulgar en las islas de Cuba y de Puerto-Rico la ley de Enjuiciamiento civil que rige en la Península.

Art. 3.° La ley de Enjuiciamiento civil comenzará á regir en aquellas provincias el dia 1.° de Julio de 1866, y será de obligatoria observancia para todos los tribunales y juzgados, cualquiera que sea su fuero, que no la tengan especial para sus procedimientos.

Art. 8.° Se autoriza al Ministro de Ultramar para dictar las disposiciones que fueren oportunas para el establecimiento de jueces de paz en los territorios de Cuba y de Puerto-Rico.»

INSTRUCCION DE 9 DE DICIEMBRE DE 1865.

«Art. 1.° Las cantidades designadas para la Península en diversos artículos de la ley de Enjuiciamiento civil, reducidas á escudos, se computarán en las islas de Cuba y Puerto-Rico al respecto de 2,50 escudos por uno.

Art. 2.° Se esceptúan de la disposicion anterior:

1.° Las cantidades que determinan el máximum de los juicios verbales y de menor cuantía, que continuarán siendo respectivamente las de 400 y 2,000 escudos, segun está prevenido por los reglamentos de 21 de Febrero de 1853.»

REAL ÓRDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1865.

«20. En el caso en que un juez de paz haya de demandar á uno de sus suplentes, ó vice versa, á juicio de conciliacion ó verbal, y no hubiere más jueces de paz en el pueblo, corresponderá al otro suplente el conocimiento del asunto; y en su defecto, al alcalde y los tenientes del mismo, con sujecion á las reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil.

Donde hubiere más de un juez de paz, deberá el demandante acudir primero al más antiguo de la misma clase, segun el órden numérico; despues á los suplentes, en la misma forma, y por último á los alcaldes ó tenientes.

23. Se suprimen los juzgados de avenencia que hoy existen con arreglo á las disposiciones del Código de comercio y de la ley de su enjuiciamiento especial.

26. Unos y otros (los secretarios y porteros de los juzgados de paz) percibirán los derechos de arancel vigentes, ó los que en lo sucesivo se establezcan para los actos en que funcionen como tales.

27. Los secretarios son responsables de la conservacion de los libros de actos de conciliacion.....

Al fin de cada bienio harán entrega de dichos libros y documentos en la alcaldía mayor respectiva, recogiendo el oportuno resguardo, sin el cual no quedarán exentos de aquella responsabilidad.»

REAL ÓRDEN DE 28 DE ENERO DE 1868.

Se declara, entre otras cosas, que los jueces de paz deben actuar con sus secretarios, y no con los escribanos, para llevar á efecto lo convenido en los actos de conciliacion.

SECCION II.

Legislacion estranjera.

La conciliacion, en el concepto bajo el cual la examinamos en el presente artículo, ha sido considerada como una conquista de las ideas filantrópicas y liberales, difundidas por

la filosofía moderna. Inútil seria, por tanto, buscar esta saludable institucion en el derecho romano, ni en ninguna de las legislaciones antiguas. En todas ellas se encontrarán, como en la nuestra, y segun espondremos en la seccion I de la *parte doctrinal*, disposiciones encaminadas á favorecer ó recomendar la terminacion de los litigios por medio de la transaccion ó avenencia entre los interesados; pero no la conciliacion organizada, tal como hoy se halla, ni exigida como requisito prévio indispensable á toda contienda judicial, susceptible de avenencia.

La Asamblea constituyente de Francia formuló las bases de esta institucion por su ley de 24 de Agosto de 1790, desarrollándola despues en su Código de procedimiento civil; y esto mismo han hecho las demás naciones, que, aceptando las ideas modernas, y siguiendo el movimiento de codificacion, si no iniciado, impulsado por la propia Francia, han reformado su antiguo modo de enjuiciar y la organizacion de sus tribunales.

Dos sistemas diferentes, aunque dirigidos á un mismo fin, se han seguido sobre esta materia. Consiste el uno en exigir que, en todo negocio susceptible de avenencia, se intente la conciliacion como acto prévio á la demanda, sin cuyo requisito no podrá ser esta admitida, debiendo celebrarse el acto ante un juez distinto del que haya de conocer del pleito. Y el otro, en facultar al mismo juez ó tribunal, que conoce de la contienda, para que convoque á las partes ante sí, ó ante uno de sus individuos, con el objeto de exhortarlas á la conciliacion, cuando estime que por este medio puede terminarse el litigio.

El primero de estos sistemas exije que la ley determine circunstanciadamente, como se ha hecho en nuestra ley de Enjuiciamiento civil, los casos esceptuados de la conciliacion, el juez competente para conocer de ella, la forma de la demanda, citacion y demás procedimientos que hayan de emplearse, y los efectos que produce el acto, haya ó no avenencia. Por regla general se dá el nombre de jueces de paz á los funcionarios que intervienen en estos actos. En el segundo sistema, como queda á la discrecion del tribunal el apreciar si el negocio es ó no susceptible de avenencia, no tiene la ley necesidad de determinar *á priori* los casos esceptuados, ni la competencia del juez, puesto que es el mismo ante quien se ha presentado la demanda, limitándose á ordenar la forma en que ha de consignarse el acto y sus efectos.

Francia adoptó el primer sistema, y lo han seguido Holanda, Portugal y otras naciones, que como España se han inspirado sobre este punto en la legislacion francesa. El segundo sistema ha prevalecido en Prusia, Países-Bajos, Ginebra, y otras. Basta para el objeto de la Enciclopedia dejar indicados los dos sistemas, y esponer la legislacion que sobre el uno y el otro rige en alguna de dichas naciones, para que puedan compararse en su procedimiento y efectos, y hacer á la vez igual estudio respecto del sistema seguido en España.

Francia. El título 1.° libro 2.° de la 1.ª parte de su *Código de procedimiento civil* lleva por epígrafe «*De la conciliacion.*» Comprende los arts. 48 á 58 inclusive. En ellos se establece, que no se admitirá en los tribunales de primera instancia ninguna demanda principal entre partes capaces de transigir, y sobre materia susceptible de transaccion, sin que el demandado haya sido préviamente citado á conciliacion ante el juez de paz, ó hayan comparecido ante él voluntariamente ambas partes.

Se esceptúan del preliminar de la conciliacion: las demandas que interesan al Estado, ó versan sobre bienes nacionales, comunes, de establecimientos públicos, de menores, de inhabilitados y de herencias vacantes: las de naturaleza urgente: las que tienen por objeto la intervencion de bienes, ó la garantía y eviccion: las de asuntos de comercio: las de alzamiento de retencion ó embargo, pago de alquileres, rentas ó pensiones: las de los procuradores en reclamacion de costas y gastos del juicio: las que se dirijan contra mas de dos partes, aunque tengan el mismo interés: las de competencia: las ejecuciones y concursos: las que versen sobre separacion de bienes, tutelas y curatelas; y en general, todas aquellas que exigen celeridad en los procedimientos, ó en que no hay posibilidad de

obtener la avenencia, ya por la materia sobre que versen, ó ya por las circunstancias de las personas de cuyo interés se trate.

El juez de paz del domicilio del demandado es el competente para conocer de la conciliacion. De su órden se hace la citacion al demandado, con tres dias de anticipacion á lo menos, por un ujier ó portero del juzgado de paz, por medio de cédula, dando á conocer en ella sucintamente el objeto de la conciliacion.

Las partes deben comparecer personalmente, y en caso de impedimento, por procurador. En el acto de la comparecencia, puede el demandante esplicar y aun adicionar su demanda, y el demandado proponer las escepciones que juzgue convenientes. En el proceso verbal ó acta que debe estenderse, se han de espresar las condiciones del convenio, si lo hubiere; y en otro caso, se ha de hacer constar que las partes no han podido avenirse. Los convenios de los interesados consignados en el acta, tienen fuerza de obligacion privada.

Puede alguna de las partes deferir al juramento de la otra, y el juez debe recibirlo, ó consignar su denegacion.

Si alguna de las partes no compareciere, ha de ser condenada á una multa de diez francos; y mientras no acredite haberla satisfecho, le es denegada toda audiencia.

La citacion para la conciliacion interrumpe la prescripcion y constituye en mora al deudor para el pago de intereses, siempre que se interponga la correspondiente demanda dentro de un mes, contado desde el dia de la falta de comparecencia, ó del acto de conciliacion sin efecto.

Portugal. Tambien en esta nacion se ha seguido el sistema de la conciliacion prévia ante juez distinto del que haya de conocer del pleito. Lleva por epígrafe «*De la conciliacion*» el título 8.° de su *novísima reforma judicial*, decretada en 21 de Mayo de 1841, en virtud de autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 28 de Noviembre de 1840. Es un verdadero código de organizacion judicial y de procedimientos civil y criminal, que contiene 1272 artículos.

En el 210 se dispone, que no se comenzará ninguna causa en juicio contencioso sin que el asunto haya sido sometido préviamente á *juicio de conciliacion*, ya sea por mandado del juez de paz, ya por voluntaria comparecencia de las partes. Se esceptúa espresamente de este requisito; los pleitos en que se halle inmediatamente interesada la Hacienda nacional: las causas criminales intentadas criminalmente: los negocios en que sean parte corporaciones administrativas ó establecimientos públicos, menores ú otras personas sujetas á tutela ó curaduría: los que versen sobre el estado civil de las personas: los que se sometan al juicio de árbitros: las reclamaciones de daños y perjuicios contra jueces ó contra funcionarios del ministerio público: las demandas de *juramento de alma* ó deferido: las ejecutivas por alquiler de casas: las de desahucio de fincas rústicas y urbanas: las de atentado ó despojo: las de alimentos provisionales: las ejecutivas por emolumentos de jueces, honorarios de abogados, y derechos de procuradores, escribanos y demás oficiales de justicia: las de abolicion de vínculos por falta de rendimiento legal: las de reduccion de cargas en bienes vinculados: las de escasa cuantía, que no esceda de 6,000 reis: las de ejecucion de providencia de conciliacion: las del fiador contra el deudor para reintegrarse de lo que por él pagó: las de preferencias: las de administracion de bienes de ausentes: las de suplemento de consentimiento paterno: todas las reclamaciones preparatorias de un juicio, ó que tengan por objeto impedir la prescripcion: los negocios de jurisdiccion voluntaria: las causas de divorcio: las cuestiones incidentales: los pleitos en que hubiere mas de dos demandados habitantes en diferentes distritos de juzgado de paz: las demandas que requieren celeridad por tener el objeto de evitar un daño que, realizado, seria irreparable; y en general, todas aquellas en que tengan interés personas incapacitadas para transigir, ó cuyo objeto no sea susceptible de avenencia, ó que se hallen especialmente esceptuadas por las leyes.

Tambien se previene en el art. 566, que

antes de procederse á la ejecucion de una sentencia, que verse sobre objeto líquido ó ilíquido, tendrá siempre lugar la conciliacion para regular la cantidad, ó el modo de ejecutarla, ó la forma del pago; esceptuándose los casos antedichos en que no es necesaria la conciliacion.

La omision de la conciliacion en los asuntos no esceptuados produce nulidad insubsanable. En cualquier estado del pleito en que se persone el ausente, debe ser citado á conciliacion (art. 211).

El juez de paz del domicilio del demandado es el competente para la conciliacion (artículo 177). A este fin el actor debe presentarle una peticion firmada, y si no sabe, por un testigo á su ruego, espresando en ella el nombre del demandado y el objeto de la conciliacion; y si fuere tal la naturaleza del asunto, que hubieren de intervenir marido y mujer, se espresará el nombre de ámbos (artículo 212).

El juez de paz designa el dia y hora en que haya de tener lugar la conciliacion; y tanto el actor como el demandado deben comparecer ante él por sí, ó por medio de procurador con poder especial para transigir. Cuando no se hiciere así, el juez mandará estender la correspondiente nota (art. 213 y 214).

Si en el dia designado, el demandado remitiere certificacion de enfermedad, en la cual se acredite la imposibilidad absoluta de nombrar procurador, el juez de paz debe señalar el término improrogable de nueve dias, y en el último de ellos ha de tener lugar necesariamente la conciliacion, ó la declaracion de rebeldía, segun comparezca ó no el demandado. Cuando la certificacion no contuviere aquella espresion, debe mandar el juez se tome nota de la rebeldía (arts. 215 y 216).

Compareciendo las partes en el dia y hora señalados, el juez de paz, oyéndolas, procurará efectuar la conciliacion por medios prudentes. Si lo consiguiere, debe mandar levantar acta en el libro correspondiente, en la cual se han de espresar con claridad los términos de la conciliacion, y la hará trascribir en la papeleta ó solicitud del actor, dándose copia al demandado, si la pidiere (art. 217).

Si fuere parcial la conciliacion, ó no hubiere avenencia, se consignará tambien en el acta del modo antedicho (art. 220).

Para conseguir la conciliacion, deben los jueces de paz emplear los medios que la prudencia y la equidad les sugieran, haciendo ver á las partes los males que les resultarán del pleito; pero absteniéndose de coacciones, violencias ni cavilosidades, bajo pena de ser condenados por abuso de poder y á la indemnizacion de daños y perjuicios (arts. 135 y 218).

No puede entablarse demanda en juicio sobre asunto convenido totalmente en el acto de conciliacion. Cuando alguna de las partes se negare al cumplimiento del convenio, debe procederse á su ejecucion por el juez competente, en vista del acta firmada por el de paz, que tiene fuerza de sentencia y lleva aparejada ejecucion (art. 219).

Si el demandante no compareciere en el dia y hora señalados, quedará *circunducta* (ó como hecha maliciosamente ó con engaño) la citacion, y se repetirá el señalamiento; y á la tercera vez, podrá el demandado pedir certificacion y solicitar con ella la absolucion de la demanda (art. 221).

Si el demandado rebelde para la conciliacion, fuese condenado en el juicio contencioso, pagará el triplo de la multa que debiera pagar en otro caso, no pudiendo esceder esta de 500,000 reis (art. 222).

Giuebra. En este canton suizo se ha seguido el sistema de la conciliacion ante el mismo juez ó tribunal, que conoce del pleito. El título 6.° de su ley de procedimientos de 5 de Diciembre de 1832 está dedicado á esta materia, y lleva tambien por epígrafe «*De la conciliacion.*» En el art. 78 se dispone que los tribunales civiles del canton, tanto inferiores como de apelacion, en todos los asuntos judiciales, que crean conciliables por su naturaleza, deberán, antes ó despues de las peticiones ó escritos de los abogados, dar comision á uno de sus miembros para oir particularmente á las partes y conciliarlas, si fuere posible. Como se deja al criterio del tribunal la apreciacion de si el negocio es ó no susceptible de avenencia, no se establece ninguna escepcion.

Siempre que las partes ó el magistrado encargado de conciliarlas lo estimen conveniente, éste hará escribir las transacciones conciliatorias y las firmará con las partes. Si estas, ó alguna de ellas, no saben ó no pueden firmar, se hará mencion de esta circunstancia, y sus firmas serán suplidas con las de dos testigos (art. 79).

Las transacciones conciliatorias, así estendidas, han de llevar la fecha del dia en que se celebren: hacen plena fé de su contenido entre las partes contratantes, y sus herederos ó causa-habientes; y para los demás efectos solo tienen fuerza de obligacion privada (art. 80).

Dichas transacciones se trascriben sin derechos á un registro particular, que se lleva para ello en la escribanía del tribunal, en el que son certificadas por el juez y escribano. Tambien pueden estenderse directamente en dicho registro, cuando se celebran antes de principiarse el pleito, firmándolas el juez con las partes, ó dos testigos á su ruego, á cuyo fin se confiere á los oidores en sus distritos y á los alcaldes en sus comarcas, la facultad de citarlas, sin derechos, con el objeto de procurar la conciliacion. Estos registros se conservan en la escribanía del tribunal, ó en el archivo de la alcaldía respectiva (arts. 77 y 81 á 84).

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Reseña histórica.

Sec. II. Naturaleza y objeto de la conciliacion.

Sec. III. De los asuntos en que debe, ó no, intentarse la conciliacion.

§. 1.° *Juicios á que debe preceder la conciliacion: efectos de la falta de este requisito.*

§. 2.° *Casos esceptuados de la conciliacion.*

Sec. IV. De las personas que intervienen en los actos de conciliacion.

§. 1.° *Demandante y demandado.*

§. 2.° *Hombres buenos.*

§. 3.° *Juez competente.*

§. 4.° *Secretario.*

Sec. V. Del procedimiento en los actos de conciliacion.

§. 1.° *Demanda y citacion.*

§. 2.° *Comparecencia y celebracion del acto.*

§. 3.° *Incidentes.*

Sec. VI. De los efectos de la conciliacion.

§. 1.° *Efectos de la conciliacion intentada.*

§. 2.° *Efectos de la conciliacion convenida, y recursos para invalidarla.*

Sec. VII. Ejecucion de lo convenido en acto de conciliacion.

Sec. VIII. De la conciliacion en asuntos de comercio.

Sec. IX. De la conciliacion en materia criminal.

Sec. X. De la conciliacion, cuando el demandado goza de fuero especial.

Sec. XI. De la conciliacion en ultramar.

SECCION I.

RESEÑA HISTÓRICA.

Atendido el objeto de la conciliacion, considerada en abstracto, es muy natural que en la legislacion de todos los tiempos y de todos los países se encuentren disposiciones encaminadas á favorecerla. Los atenienses dieron fuerza obligatoria á los convenios que celebraban los litigantes antes de comparecer en juicio; y los romanos trasladaron esta disposicion á la 1.ª de las Doce Tablas. *Endo. via. rem. uti. paicunto. rato. Si por el camino se aviniesen, sea esto válido.* Antes de invocar la autoridad de los pretores, intentaban casi siempre los medios de avenencia, y por eso decia Tito Livio, que en Roma, cada casa era un tribunal *de confianza*, en que los parientes y los amigos se gloriaban de

velar para que por medios conciliatorios se evitaran los litigios.

En los primeros tiempos del cristianismo, estaba recomendado á los fieles la incomunicacion con los paganos, y como por otra parte era necesario, para comparecer ante los jueces gentiles, prestar juramento por el génio de los emperadores, aquellos, para dirimir las controversias que entre ellos se promovian, acudian á los obispos, los cuales con la sabiduría de sus consejos y con la uncion y suavidad de sus exhortaciones, los inclinaban á la transaccion y á la concordia, repitiendo las palabras del divino Maestro: *Esto consentiens adversario tuo citò dum es in via cum eo: ne fortè tradat te adversarius judici* (1). De este modo evitaba la Iglesia en sus primeros tiempos multitud de pleitos, calmando el ardor de las pasiones, y haciendo venir á un solo punto los ánimos encontrados de los que se preparaban para litigar. Y este ejemplo sublime de caridad encontró eco en todos los países cultos, aconsejándose primero, y estableciéndose despues como preliminar de los juicios el medio de la conciliacion.

Así ha sucedido en España. En todos nuestros códigos antiguos se encuentran disposiciones que recomiendan la conciliacion de los litigantes. «Avenencia, dice la ley 26, título 4.° de la Part. 3.ª, es cosa que los omes deben mucho cobdiciar de aver entresí; é mayormente aquellos que han pleito, ó contienda sobre alguna razon, en que cuidan aver derecho.» Aun es mas concreta al caso la prevencion que sobre este punto se hizo á los corregidores por el cap. 3.° de la instruccion de 15 de Mayo de 1788 (2): «Evitarán, dice, en cuanto puedan los pleitos, *procurando que las partes se compongan amistosa y voluntariamente....*, para lo cual se valdrán de la persuacion y de todos los medios que les dictare su prudencia, haciéndoles ver el interés que á ellas mismas les resulta, y los perjuicios y dispendios inseparables de los litigios, aun cuando se ganen.»

Siguiendo el mismo espíritu de las leyes de Castilla, en los fueros concedidos á las islas Baleares en 1230 por Don Jáime el Conquistador se dispuso que los hombres buenos de Mallorca pudieran entender en la *pacificacion* y decision de los pleitos que ocurrieran entre particulares.

Y hasta en el Fuero Juzgo, el mas antiguo de nuestros códigos, se encuentran disposiciones encaminadas á terminar los pleitos por medio de la conciliacion ó avenencia. No era otra la mision de los *mandaderos de paz, pacis adsertores*, como se les llama en el testo latino; jueces comisionados por el rey para poner paz entre las partes en negocios determinados. «Mas aquellos que son mandaderos de paz, dice la ley 15, título 1.° del lib. 2.°, non deben judgar nengun pleito si non quantol mandare el rey. Y *mandadero de paz*, es aquel á quien envia el rey solamiente por meter paz entre las partes.» Es verdad que otra ley del propio Fuero Juzgo, la 5.ª, tít. 2.° del lib. 2.°, atribuida á Recesvinto, como la anterior, prohibe toda avenencia ó composicion de las partes, despues de comenzado el pleito, bajo la pena de «pechar cada uno al rey tanto cuanto era la demanda,» y la de cien azotes al insolvente, á no ser que lo hicieran por mandato ó con autorizacion del rey ó del juez; mas esto se mandó para evitar el abuso, que solia cometerse, de transigir los litigantes sus querellas «por esquivar la pena de la ley;» no en oposicion á la terminacion de los pleitos por medio de la avenencia, favorecida en otras leyes del mismo código.

Pero en las disposiciones antes citadas, ni en otras análogas que pudieran invocarse, no se encuentra, como algunos pretenden, el orígen de la conciliacion, tal como hoy se halla establecida, pues solo se dirigen á recomendar ó favorecer la avenencia de los litigantes. El orígen de esa saludable institucion en España puede deducirse realmente de otras disposiciones dictadas para asuntos especiales, como son los de comercio y los de fuero de marina.

En las *Ordenanzas de Bilbao*, aprobadas y publicadas por cédula del Consejo de 2 de Diciembre de 1737, y que, como es sabi-

(1) San Mateo, cap. 5, v 25.
(2) Ley 10, tit. 1.°, lib. 11, Nov. Recop.

do, fueron la legislacion mercantil, que se observaba casi esclusivamente en todo el reino hasta la publicacion del Código de comercio de 1829, se encuentra ya establecida la conciliacion prévia; pero ante el mismo juez que habia de conocer del negocio. En el número 6.° del cap. 1.° se ordenó lo siguiente:

«Siempre que cualquiera persona pareciere en dicho consulado á intentar cualquier accion, no se le admitan ni puedan admitir demandas, ni peticiones algunas, por escrito, sin que ante todas cosas *el prior y cónsules hagan parecer ante sí á las partes*, si buenamente pudiesen ser habidas, y oyéndolas verbalmente sus acciones y escepciones, *procurarán atajar entre ellas el pleito* y diferencia que tuvieren, con la mayor brevedad; y no lo pudiendo conseguir, les admitan sus peticiones por escrito.» Este principio se desarrolló despues en el Código de comercio, mas en armonía con la conciliacion actual, como luego veremos.

Y en las *Ordenanzas de matrículas* de 2 de Enero de 1802, título 1.°, art. 31, despues de consignar la conveniencia de evitar todo lo posible los pleitos entre la gente de mar, entre las disposiciones que á este fin se dictaron, se encuentra la siguiente: «Es mi voluntad que antes que las causas lleguen á empeñarse en la necesidad de seguirse por términos legales, procuren los comandantes serenarlas y desvanecerlas, *convocando á las partes á presencia de auditor y escribano para persuadirles de sus ventajas en una amigable composicion*, lo que ha de constar en autos, concurriendo con eficacia á que no prevalezcan las enemistades y discordias; y así no se dará curso á segundo pedimento en causas transigibles, sin constar por testimonio estar efectuadas las prevenciones antecedentes; de cuya omision se hará un grave cargo al escribano y auditor.» Dicha comparecencia debia ser personal, como se declaró por Real órden de 21 de Octubre de 1832, en razon á que se facilitaria la avenencia en muchos casos, precisando á las partes á verse y hablarse.

Estos precedentes habia en nuestra legislacion, cuando la Constitucion de 1812, siguiendo el impulso de las ideas modernas, de que hemos hablado al esponer la *legislacion estranjera*, consignó en su art. 284 el principio de que, «sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno.» A la vez, por el art. 282 confirió al alcalde de cada pueblo el *oficio de conciliador*, imponiendo la obligacion de presentarse ante él con este objeto á todo el que tuviera que demandar por negocios civiles ó por injurias; y en el 283 ordenó el procedimiento que para ello habia de seguirse, reducido á que el alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oyera al demandante y demandado, y en vista de las razones, en que respectivamente apoyaran su pretension, tomara, oido el dictámen de los dos asociados, la providencia que le pareciese propia para el fin de terminar el litigio sin mas progresos, como se terminaria en efecto, si las partes se aquietasen con esta decision estrajudicial. Y estos principios tuvieron su natural desarrollo en el decreto de las propias Córtes constituyentes, promulgado como ley en 9 de Octubre del mismo año 1812.

Así se estableció en España la conciliacion, como acto prévio á toda demanda judicial sobre negocio susceptible de avenencia. Pero como debió su orígen al sistema constitucional, ha sufrido las mismas vicisitudes que este. Desapareció con la Constitucion en 1814, y se restableció con esta en 1820, para volver á desaparecer en 1823. En este segundo período se dictó el decreto de las Córtes de 18 de Mayo de 1821, sancionado como ley en 3 de Junio siguiente, y restablecido en 1837, por el que se ampliaron y reglamentaron las disposiciones sobre conciliacion. Se declaró por él que en los pleitos civiles ó por injurias, en que fuesen demandados eclesiásticos ó militares, debia preceder el medio de la conciliacion, del mismo modo que cuando se demanda á los demás ciudadanos. Se hizo tambien estensivo á las causas de divorcio, como meramente civiles. Se esceptuaron los juicios verbales y los de naturaleza urgente, como tambien todos los que no son susceptibles de avenencia por el objeto del negocio ó por la

clase de las personas interesadas. Y se prescribieron reglas para la celebracion del acto conciliatorio, dándole por primera vez el nombre de *juicio*, á pesar de las últimas palabras del art. 283 de la Constitucion, que habia calificado de *decision estrajudicial* la providencia del juez conciliador.

Sin embargo de que con el restablecimiento del régimen absoluto en 1823 desapareció la conciliacion, como eran ya notorias sus ventajas, y estaba además admitida en los asuntos mercantiles del modo que hemos indicado, se dió cabida á esta saludable institucion, aunque disfrazada con el nombre de *comparecencia*, en el Código de comercio, sancionado por el Rey D. Fernando 7.° en 30 de Mayo de 1829, y en la ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio de 24 de Julio de 1830. Para estas comparecencias se crearon *jueces avenidores*, distintos de los que habian de conocer en la vía contenciosa, y se dictaron reglas circunstanciadas para su celebracion, análogas á las que habian regido para la conciliacion en los asuntos comunes; si bien no se dió al juez avenidor la facultad de dictar providencia, sino solo la de proponer á las partes *los medios de conciliacion que halle mas conformes á justicia y equidad*. Se dió fuerza ejecutiva entre las partes obligadas á los convenios celebrados de este modo, como si se hubieran contratado en escritura pública. Y se exigió ese medio de conciliacion con mas rigor que en el derecho comun, puesto que se impuso la multa de mil reales al juez y escribano que diesen curso á una demanda, á que no se acompañase la certificacion de haber intentado la comparecencia ante el juez avenidor, y se declaró la nulidad de todo lo actuado, imponiendo al demandante las costas, daños y perjuicios. Pueden verse las disposiciones sobre esta materia en el artículo **COMPARECENCIA** *en lo mercantil*.

Con el cambio político, ocurrido al principio del reinado de Doña Isabel II, volvió á renacer la conciliacion con todos sus atributos, y así ha continuado hasta el dia con ligeras modificaciones. En el *Reglamento provisional* para la administracion de justicia de 26 de Setiembre de 1835, se refundieron los artículos de la Constitucion de 1812 relativos á la conciliacion, y las disposiciones reglamentarias del decreto de las Córtes de 1821, antes citados, que, no obstante, se restablecieron poco despues, quedando ya en plena observancia el principio general, consignado en el art. 21 de dicho reglamento, de que «sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion y que esta no ha tenido efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil sobre negocio susceptible de ser completamente terminado por avenencia de las partes; ni tampoco querella alguna sobre meras injurias, de aquellas en que, sin detrimento de la justicia, se repara la ofensa con sola la condonacion del ofendido.»

En este importante reglamento (art. 24) se dió por primera vez el nombre de *jueces de paz* á los jueces conciliadores, iniciando así una nueva categoría, que despues ha venido á ocupar el primer grado en la escala ascendente de la gerarquía judicial. Por entonces, sin embargo, se confirió el cargo á los alcaldes y tenientes de alcalde en sus respectivas demarcaciones ó términos municipales, dándoles la facultad de llevar á efecto la providencia que dictaren, cuando las partes se aquietaran con ella. Pero esto fué despues modificado por el reglamento de los juzgados de primera instancia, de 1.° de Mayo de 1844, que estableció una limitacion por su art. 104 diciendo: «Si los alcaldes y sus tenientes, como *jueces de paz*, llevasen á efecto las providencias con que las partes se hubieren aquietado, segun dispone el art. 24 del reglamento provisional para la administracion de justicia, tan pronto como se suscite tercería ú otra cuestion agena de la convenida en el *juicio de paz*, ó bien sea necesario conocimiento del derecho para su ejecucion, remitirán las diligencias á los juzgados respectivos, y éstos las continuarán con arreglo á las leyes.»

Y no es esto tampoco lo que hoy se halla en observancia: el llamado *juicio de conciliacion* ó *juicio de paz* ha sido reformado, aunque sin variar su esencia, dándole el nombre de *acto de conciliacion*, por la ley de Enjui-

ciamiento civil, sancionada en 5 de Octubre de 1855, que consagra un título á esta materia, cuyas disposiciones, que son las vigentes en el dia, las espondremos en las secciones siguientes.

SECCION II.

NATURALEZA Y OBJETO DE LA CONCILIACION.

En la reseña histórica que acabamos de hacer hemos visto, que el medio de la conciliacion, establecido en España, como preliminar de todo litigio susceptible de avenencia, por la Constitucion política de 1812, adquirió el carácter de juicio, no obstante la calificacion que hizo de él esta misma ley, dando el nombre de *decision estrajudicial* á la providencia del juez conciliador. La reclamacion del actor y la contestacion del demandado constituian una verdadera controversia, á la cual ponia término una sentencia dictada sobre el punto controvertido. No tiene otras formalidades esenciales el juicio propiamente dicho; pues la prueba y las demás actuaciones que en él se practican, solo sirven para esclarecer los puntos oscuros de la contienda y dilucidar ámpliamente las cuestiones que se proponen en la demanda y en su impugnacion.

Creemos, por lo tanto, justificada la denominacion de *juicio* que dieron á la conciliacion la ley de 5 de Junio de 1821 y todas las disposiciones que le subsiguieron hasta la de 1855, sin que obstara á ello la circunstancia de que la sentencia del juez conciliador no surtiera efecto alguno sino por la conformidad de las partes, porque esto mismo sucede y sucedió siempre respecto de los demás juicios, cuya decision carece de fuerza ejecutoria mientras alguno de los litigantes puede reclamar contra ella por medio de los recursos, que las leyes tienen establecidos para conseguir su revocacion.

Mas, prescindiendo de la razon con que se atribuyera á la conciliacion el carácter de juicio en sus primeros tiempos, cumple ahora á nuestro propósito dejar sentado, que en el dia ha cambiado de nombre, tomando el que mas conviene á su naturaleza actual. Ya no concede la ley al juez conciliador la facultad de decidir, siquiera sea amistosamente, las cuestiones promovidas por los litigantes que comparecen ante su autoridad: no pronuncia sentencia despues de oir las alegaciones de los interesados: no impone precepto alguno; sino que se limita á ejercer las funciones de un mediador, procurando con sus prudentes exhortaciones restablecer la paz entre los que se aprestan á entablar una contienda judicial. Tal es el carácter que se ha dado á la conciliacion por la ley de Enjuiciamiento civil; y en tal concepto ha perdido la naturaleza de *juicio*, y se la llama con propiedad *acto de conciliacion*.

Conserva, pues, la conciliacion la naturaleza de acto estrajudicial, que le dió la Constitucion de 1812; pero aplicando el calificativo *estrajudicial* con relacion al juicio, y no al acto ni á la persona del juez. En el primer concepto no es acto judicial la conciliacion, puesto que hoy carece de uno de los requisitos esenciales del juicio, cual es la sentencia; pero lo es realmente en el segundo, en razon á que, además de ser un requisito judicial, es indispensable la presencia é intervencion del juez de paz, y la del secretario de su juzgado, el cual certifica de lo que ante él pasa, respondiendo de su verdad y exactitud, y consignándolo en el libro ó registro correspondiente, debiendo además preceder citacion formal y guardarse en todo ello las reglas y solemnidades que la ley tiene establecidas. De consiguiente, la conciliacion no es, ni ha sido nunca, un acto judicial en el fondo; pero lo es en la forma, la cual le dá el carácter de acto público y solemne.

Importa mucho fijar bien este punto, por los efectos que produce, y para evitar confusiones. Como en la conciliacion no hay decision ó sentencia judicial, le falta este requisito para que el acto tenga el carácter de juicio, segun hemos dicho. Por esta razon, si en ella se convienen las partes, este convenio, en el fondo, tiene el carácter de estrajudicial, pues depende esclusivamente de la voluntad y consentimiento de los interesados. Y lo propio sucedia cuando el juez de paz dictaba

providencia: esta providencia realmente no tenia el carácter de decision judicial; sino el de una proposicion conciliatoria, por sí, aceptándola las partes libre y espontáneamente, podia conseguirse su avenencia y la terminacion del litigio. Ni el nombre ni la forma alteran la esencia de las cosas: de consiguiente, el convenio en el fondo es estrajudicial, como lo ha sido siempre, conforme á lo declarado por el art. 283 de la Constitucion de 1812, y sus efectos no pueden ser otros que los de cualquier convenio celebrado por los interesados. En tal concepto el código francés tiene declarado que los convenios de las partes, insertos en el acta ó proceso verbal de la conciliacion, tienen fuerza de obligacion privada.

Pero si bien el convenio, en el fondo, es estrajudicial, por no ser impuesto en virtud y por la fuerza obligatoria de una sentencia de juez competente, no sucede así en cuanto á su forma, toda vez que interviene la autoridad judicial, y es un acto preparatorio del juicio. Así como las partes pueden avenirse por medio de la conciliacion, tambien pueden verificarlo estrajudicial y privadamente, consignando su convenio en documento privado ó en escritura pública. El convenio en sí será el mismo en todo caso; pero difiere esencialmente en cuanto á la forma de justificarlo, y por consiguiente tambien respecto á los procedimientos que han de emplearse para exigir su cumplimiento. La intervencion del juez de paz y de su secretario eleva estas actuaciones á la categoría de judiciales, y por tanto el acto á la de público y solemne, cuya categoría tiene tambien la certificacion librada con referencia al libro ó registro respectivo por el funcionario que de él está encargado, que es el secretario. De aquí el que estos documentos hagan plena fé en juicio, como comprendidos entre los que designa el artículo 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, para la prueba del convenio celebrado en el acto de conciliacion, y que sean ejecutivos en la forma que se espondrá en la seccion VII.

La calificacion que hemos hecho de la naturaleza y carácter del acto de conciliacion en su fondo y en su forma, está confirmada por varias disposiciones. En las de papel sellado se previene, que las certificaciones de actas de conciliacion, cuando resulte avenencia, se estiendan en el del precio proporcional á la cuantía del asunto, y si éste no es valuable, en el del sello de 32 rs. (1), colocando estos documentos en la clase de escrituras públicas; y en la de actuaciones judiciales las actas que se estienden en el libro, como tambien las certificaciones que de ellas se libran, cuando no resulta avenencia, previniendo que en unas y otras se use el sello judicial de 4 rs. (2).

Tambien por el art. 8.° del reglamento general de 21 de Junio de 1861 para la ejecucion de la ley Hipotecaria, se dió espresamente el carácter de documentos auténticos á las certificaciones de los actos de conciliacion, en que por convenio de las partes se constituya algun derecho real sobre bienes determinados, declarando que dichas certificaciones pueden servir de títulos al dominio ó derecho real, y hacen fé por sí solos para los efectos de la inscripcion en el registro de la propiedad; y si bien en el mismo reglamento reformado en 1870 se ha hecho caso omiso de esta circunstancia, es sin duda porque tales documentos están comprendidos entre los espedidos por autoridad judicial, que han sido adicionados para dichos efectos en el artículo 3.° de la propia ley reformada. Solo para un efecto están esceptuados de dicho carácter; para el de inscribir las hipotecas voluntarias en ellos convenidas (3), y es porque el art. 146 de la citada ley exige que, para perjudicar á tercero, se constituyan en escritura pública; pero se declara á la vez que es obligatorio el otorgamiento de ésta, cuando en el acto de conciliacion se haya convenido en la constitucion de la hipoteca.

Determinados ya la naturaleza y carácter de los actos de que se trata, en su fondo y en su forma, veamos cuál es el objeto de la con-

(1) Arts. 7.° y 9.° del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861.
(2) Art. 28 de id.
(3) Real órden de 13 de Diciembre de 1867.

ciliacion. Este no es otro que evitar los pleitos y restablecer la armonía entre los que van á litigar, restituyendo la paz á las familias. En estas breves palabras se comprende el gran pensamiento que se inició en las Córtes constituyentes de Cádiz, y que ha venido á perfeccionarse y llevarse á efecto con general aplauso en nuestros dias. Por eso decia á este propósito el reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835, en su art. 30: «Los jueces de paz, penetrándose de la importancia de sus funciones y de lo mucho que interesa el que se eviten cuanto sea posible los pleitos y disensiones entre los ciudadanos, pondrán la mayor eficacia en conciliar á los que se presenten ante ellos; teniendo entendido que mientras mas litigios y querellas corten, mayor será el servicio que hagan al Estado, y mayor el mérito que contraigan á los ojos del Gobierno.» Pero, téngase presente que esto no es, ni podia ser un precepto; sino una recomendacion, la cual ha de entenderse en términos lícitos y prudentes. El juez de paz, que llevado de un celo exajerado, ó de la pasion y el interés, que seria peor todavía, abusando de su autoridad, cohibiese física ó moralmente la voluntad de una de las partes, obligándola á una avenencia, á la que no se hubiera prestado de buen grado, faltaria al cumplimiento de su deber, cometiendo un abuso punible, que podria además ser motivo suficiente para la nulidad del convenio; de suerte que, en vez de evitar un pleito habria dado ocasion á dos.

Reconocida la utilidad de esta benéfica institucion, se ha procurado siempre facilitar sus efectos y remover los obstáculos que pudieran oponerse á la realizacion de su fin. Tal fué el propósito con que se espidió la órden circular de la Regencia del reino de 12 de Julio de 1841, por la que se previno á las Audiencias hicieran entender á los alcaldes de los pueblos la estrecha obligacion en que estaban de proceder desde luego á celebrar los juicios de conciliacion que reclamasen los litigantes, sin necesidad de escitacion de los jueces de primera instancia. Así se cortó el abuso que se habia introducido, de exigir, para prestar aquel servicio, la presentacion de papeletas impresas, en que se les hacia dicha escitacion.

Para conseguir el objeto indicado de la conciliacion, se han seguido dos sistemas diferentes, que espusimos ya al hacer la reseña de la *legislacion estranjera*. Consiste el uno en conferir las funciones de conciliador al mismo juez que conoce del pleito; y el otro, en conferirlas á juez distinto, ante el cual deban comparecer las partes antes de entablar la demanda. Del uno y del otro tenemos ejemplos en nuestra legislacion: las ordenanzas de Bilbao y las de matrículas de mar adoptaron el primer sistema, y siguieron el segundo la Constitucion de 1812 y disposiciones posteriores, incluso el Código de comercio, como hemos indicado en la seccion anterior. ¿Cual de los dos sistemas será preferible? Los dos tienen sus encomiadores y partidarios, y hasta se hallan puestos en práctica, como hemos visto: siendo de notar, que la preferencia que haya merecido el uno sobre el otro, no ha tenido por objeto el interés de la conciliacion; sino el interés de la justicia que se ha de administrar despues en el pleito, caso de no conseguirse la avenencia de los litigantes.

El sistema de conferir las funciones de juez conciliador al mismo que ha de conocer del pleito, se funda en que este juez ha de ofrecer mayor garantía de acierto para la resolucion de la cuestion litigiosa por el conocimiento que adquiere, en el acto conciliatorio, del derecho de los litigantes, espuesto con franqueza y sencillez por ellos mismos, sin las formas que suelen emplearse en las discusiones forenses por hábiles defensores. La esposicion sencilla de los hechos, se dice, en el acto de conciliacion, y la alegacion del derecho en que fundan las partes sus respectivas pretensiones, dan á conocer con claridad la cuestion que se ventila; y si los medios conciliatorios no bastan para conducirla á un término equitativo, se lleva al juicio con todos los datos que se necesitan para resolverla en justicia.

Oigamos ahora á los sostenedores del otro sistema. El juez, dicen, que ha intervenido infructuosamente en la pacificacion de los li-

tigantes, y que se ha convencido de la inutilidad de sus esfuerzos para reducirles á la avenencia, queda prevenido desfavorablemente respecto del que la haya rehusado, y pierde mucho de la imparcialidad que debe tener para resolver con su fallo el litigio que se somete á su decision. Herido en su amor propio con un desaire, se siente involuntariamente inclinado á favor del litigante más dócil y mejor dispuesto á recibir sus consejos, por más que no sea el de mejor derecho; y eclipsada con esta preocupacion la luz de su razon, se constituye en el peligro, cuando menos, de comprometer su imparcialidad. Así lo sientan Boncenne y otros autores respetables, en sus observaciones sobre los diferentes medios de intentar la conciliacion.

En nuestro concepto, merece la preferencia el segundo sistema; mas no por las razones que quedan indicadas; sino por otras bien diferentes, que favoreciendo la conciliacion, no se oponen al interés, no menos atendible, de la justicia. No seria justo atribuir en general al juez conciliador la susceptibilidad estrema de considerar como una ofensa el desaire que recibe del litigante, que se niega á la avenencia en el acto de la conciliacion; y mucho menos nos atreveriamos á dudar de su imparcialidad por tan frívolo motivo. Otra consideracion mas poderosa nos decide á opinar, que las funciones de que tratamos deben encomendarse á un juez distinto del que, en su caso, haya de resolver en justicia la cuestion no conciliada.

La mision tan importante del juez de paz, debe ser encomendada á funcionarios que reunan cualidades especiales, no comunes á todos los hombres ni á todos los jueces. Espíritu conciliador, gran prudencia, interés por la justa conciliacion, y sobre todo, influencia y prestigio sobre sus administrados: todo esto debe buscarse en el juez de paz, y algo de esto no puede encontrarse en el juez de derecho, que muda frecuentemente de residencia por las vicisitudes de su carrera, y que apenas se comunica con los habitantes de su distrito. Por esta razon, nos parece preferible el sistema de nombrar jueces especiales para intervenir en el acto de la conciliacion, elegidos de entre los mismos vecinos del pueblo, que es lo que se viene practicando en España desde la Constitucion de 1812. De este modo se logra mas fácilmente el alto fin de la institucion, que es calmar los ánimos agitados de los litigantes é inclinarlos á la avenencia; fin, que viene consiguiéndose entre nosotros, como lo demuestran los datos estadísticos (1), no obstante que el personal de jueces de paz, salvas honrosas escepciones, dista aun mucho de reunir las condiciones apetecidas.

SECCION III.

DE LOS ASUNTOS EN QUE DEBE, Ó NO, INTENTARSE LA CONCILIACION.

El sistema de la conciliacion prévia ante juez distinto del que haya de conocer del pleito, exige, como hemos dicho, que la ley determine *á priori* los casos esceptuados de este requisito. Vamos á esponer, con la conveniente separacion, lo que nuestro derecho tiene establecido sobre el particular, tratando, primero, de la regla general y de los efectos que produce la omision de dicho requisito, cuando debe preceder á la demanda; y despues, de los casos esceptuados de la conciliacion, y de los efectos de la misma, si en ellos llegara á intentarse.

---

(1) La *Estadística de la administracion de justicia en lo civil*, publicada por el Ministerio de Gracia y Justicia, ofrece los importantes datos siguientes, acerca de los actos de conciliacion solicitados en la Península é islas adyacentes, con espresion del número de ellos en que hubo avenencia, y de los en que no la hubo, comprendiendo en estos los que se dieron por intentados por no haber comparecido alguna de las partes. La proporcion de los en que hubo avenencia con el número total de actos, es aproximadamente de 34 por 100, en cada uno de los dos años, á que se refieren los datos publicados hasta el dia:

	1861.	1862.
Número total de actos de conciliacion solicitados. .	70,941	70,296
Número de dichos actos, en que hubo avenencia. . . .	25,642	23,888
Idem de los en que no hubo avenencia, ó se dieron por intentados.	45,299	46,408

§. 1.° *Juicios á que debe preceder la conciliacion: efectos de la falta de este requisito.*

Establecida la conciliacion como medio de cortar en su orígen los pleitos que tan profundamente afectan á la paz de las familias, era natural que se prescribiera como regla general la necesidad de intentarla en todos los casos que pueden dar lugar á una controversia entre partes ante cualquier juez ó tribunal, esto es, en todos los juicios; y así se ha hecho en efecto. «No se entablará pleito ninguno, dijo la Constitucion de 1812, sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion.» Este precepto tan absoluto dá á la conciliacion el carácter de requisito prévio para todos los juicios; pero requisito indispensable, cuya omision impide la incoacion del juicio: y esto mismo vino á confirmarse despues por el reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835, que repitió la prescripcion anterior, aunque con una adicion que no deja de ser oportuna. En el artículo 21 se dijo, que sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, y *que esta no ha tenido efecto*, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil.

Bien se comprende el espíritu de esta adicion: cuando se ha intentado con éxito el medio de la conciliacion; cuando por virtud de ella se ha conseguido que las partes terminen amistosamente sus diferencias, no puede haber pleito, porque falta su motivo, que es la desavenencia de las partes. En tal caso, no procede ya la interposicion de la demanda en juicio; sino que corresponde llevar á efecto lo convenido por otro medio más sencillo, segun espondremos mas adelante. Es, pues, preciso, segun el artículo citado del reglamento, que antes de interponer cualquier demanda se haga constar que se ha intentado en vano el medio de la conciliacion. La nueva ley de Enjuiciamiento civil ha sancionado, por último, el mismo principio general, diciendo en su artículo 201: «Antes de promover un juicio, debe intentarse la conciliacion ante el juez de paz competente.» Y como complemento de esta regla, ha dispuesto en el artículo 203, que «el juez (de primera instancia) no admitirá demanda á que no acompañe certificacion del acto de conciliacion, ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho corresponda.»

A pesar de haberse establecido, como requisito prévio para promover cualquier juicio, el haber intentado el acto de la conciliacion, no se habia declarado cuáles eran los efectos que habia de producir la omision de esta indispensable formalidad, y esto daba motivo á una duda fundada. ¿Será causa de nulidad insubsanable la falta de ese requisito? ¿Podrán las partes dispensarse de su cumplimiento y entrar válidamente en el juicio sin haber intentado la conciliacion? Faltando una declaracion espresa sobre este punto, tratóse de interpretar el espíritu de la legislacion, y de aquí resultó una jurisprudencia contradictoria. Se creyó por algunos jueces que la omision del acto conciliatorio viciaba el procedimiento; y otros, por el contrario, opinaban que las actuaciones eran válidas mientras no se reclamaba la falta. Y como consecuencia de esta diversidad de opiniones, unas veces se declaraba nulo todo lo que se habia actuado sin cumplir el requisito prévio de la conciliacion, y otras se subsanaba la falta en cualquier estado del juicio, y se seguia este como si no se hubiese cometido la omision. Mas la nueva ley, ocurriendo á la necesidad de disipar esta duda, vino á determinar en su citado art. 203, que serán válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin dicho requisito, salva la responsabilidad en que el juez haya incurrido; pero que se procederá á la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note su falta.

Nos parece muy racional y justa esta determinacion, apoyada en la voluntad presunta de las partes que intervienen en el pleito. Sin negar el interés que tiene la causa pública en la disminucion de las contiendas judiciales, es preciso reconocer que los litigantes son los que en primer término reciben los beneficios de la conciliacion; y si estos interesados prescinden del acto conciliatorio por considerarlo inútil, segun la disposicion de

sus ánimos y las circunstancias especiales del asunto litigioso, parece bien que por su misma aquiescencia queden convalidadas las actuaciones, que se hayan practicado en el juicio sin haberse acudido al medio de la conciliacion. La anulacion y consiguiente repeticion de lo actuado ocasionaria gastos tan perjudiciales como innecesarios.

Pero la ley, en su justicia, debia hacer más: debia robustecer sus preceptos y ejercer un rigor saludable sobre los funcionarios encargados de su cumplimiento. Por eso ha declarado, que aunque son válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin el requisito prévio de la conciliacion, esto es sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido el juez. Cuando se presenta una demanda sin que la acompañe certificacion que acredite haberse celebrado el acto de conciliacion ó haberse intentado sin efecto, el juez debe repelerla de oficio: si no lo hace, si la admite y la dá curso á pesar de ese defecto, falta al deber que tiene de hacer cumplir las reglas del procedimiento, y por este hecho incurre en la pena establecida por el art. 43 de la ley para los funcionarios de la administracion de justicia que cometen faltas en el desempeño de su cargo. Esta pena consiste en una correccion disciplinaria, que puede imponerle la Audiencia del territorio en virtud de las facultades gubernativas que le concede la misma ley, y que fueron recordadas por real órden de 31 de Octubre de 1835, en la cual, al comunicar aquella á los regentes, se les encargó la correccion de los jueces que faltasen á sus disposiciones.

Resumiendo brevemente las prescripciones vigentes sobre esta materia, diremos: que, por regla general, es requisito indispensable para promover un juicio el acto de conciliacion celebrado ó intentado por el demandante: que esto debe acreditarse por certificacion al interponerse la demanda, sin cuyo requisito es esta inadmisible y debe ser repelida de oficio por el juez: que si así no lo hace, incurre en responsabilidad: que en cualquier estado del juicio en que se note la falta de dicho requisito, debe subsanarse; y que no obstante la omision, son válidas y subsistentes las actuaciones que se hubiesen practicado.

§. 2.° *Casos esceptuados de la conciliacion.*

Si el medio de la conciliacion es, generalmente hablando, útil y beneficioso, porque restablece la armonía y buena inteligencia entre las partes litigantes, hay casos, sin embargo, en que conviene prescindir de esta formalidad, por ser innecesaria, perjudicial ó inútil. Es innecesario el acto de conciliacion, cuando sin él puede lograrse su objeto por la índole del asunto que motiva la controversia. En tal caso, la prudencia aconseja que se procure el resultado de la conciliacion en el juicio mismo, sin anteponer á este una diligencia vana. Puede ser perjudicial, cuando el pleito es urgente por su naturaleza y no admite dilacion sin daño de los derechos del demandante. Entónces, el acto conciliatorio es una rémora para el juicio, un obstáculo á la pronta administracion de justicia, que lastima los intereses del actor. Puede, en fin, considerarse inútil en muchas ocasiones, como sucede en todos aquellos casos en que el asunto no es susceptible de avenencia, bien por razon de la materia que es objeto del juicio, ó ya por la condicion de las personas que en él intervienen. Hé aquí, pues, la razon de las diferentes escepciones, que limitan la regla general establecida respecto de la necesidad de intentar la conciliacion como requisito prévio de todos los pleitos. Espondremos con la separacion conveniente los juicios que, segun las precedentes indicaciones, forman el conjunto de los casos esceptuados de la conciliacion.

1.° *Juicios verbales.*—Toda cuestion entre partes sobre objeto, cuya cuantía no esceda de 600 rs. (hoy 250 pesetas, segun el art. 270 de la ley sobre organizacion del poder judicial), debe ventilarse en juicio verbal. En el nombre mismo de este juicio está determinada su condicion característica y su tramitacion especial, bien conocida de todos. En este pequeño pleito no se presentan escritos por los litigantes: la demanda es verbal: la contestacion se dá tambien de palabra:

las partes concurren á la presencia del juez, y entablando por sí mismas la contienda, oyen recíprocamente sus alegaciones. Siendo así, ¿qué ocasion puede ofrecerse mas oportuna para entrar en vías amistosas y realizar una avenencia? ¿Qué otras condiciones se necesitan para la celebracion del acto de conciliacion? Si se prescinde de los hombres buenos que intervienen en este último, como despues veremos, ¿no es igual la solemnidad en ambos casos y la oportunidad para verificar un acomodamiento? El mismo juez preside el acto: el mismo secretario lo autoriza: las mismas partes proponen en uno y en otro caso la cuestion litigiosa. De esperar es, por consiguiente, que si sus esplicaciones son satisfactorias y su ánimo se halla bien dispuesto, vengan á una terminacion feliz en el juicio verbal con la eficáz cooperacion de la autoridad, que bien puede despojarse de sus atribuciones judiciales para desempeñar las funciones de conciliador. Por esta razon se han esceptuado los juicios verbales de la necesidad del acto conciliatorio como requisito prévio. (Art. 4.° de la ley de 3 de Junio de 1821; art. 21 del reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835, y art. 201 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

2.° *Juicios de desahucio.*—Aunque estos juicios nunca estuvieron esceptuados del requisito prévio de la conciliacion, existia motivo para comprenderlos en la escepcion, al menos en sus primeras actuaciones; porque debiendo empezar, presentada la demanda, por una comparecencia de las partes ante el juez, á la cual llama la ley *juicio verbal*, se llena el objeto del acto conciliatorio. Con efecto, esa comparecencia de las partes ante el juez de primera instancia puede suplir la falta de una comparecencia parecida ante el juez de paz. Enterado el demandado de la pretension del actor, puede reconocer su justicia; y estando ambos presentes, no es difícil que se dén esplicaciones satisfactorias y concluyan por una avenencia. El procedimiento, además, por regla general, es breve, sumario y ejecutivo, y debia seguir la suerte de los de esta clase. Esto no obstante, el juicio de desahucio estuvo siempre sujeto al precepto general respecto de la conciliacion. Mas, habiéndose reformado varias de las disposiciones relativas al mismo, por la ley de 25 de Junio de 1867, quedó comprendido en la escepcion que se habia hecho para otros juicios. Desde entonces, la demanda de desahucio se admitirá sin que preceda el acto de conciliacion. (Art. 2.° de dicha ley.)

3.° *Juicios ejecutivos y sus incidencias.*—Desde que se estableció el acto de conciliacion, siempre se habia exigido esta formalidad como requisito indispensable para entablar el juicio ejecutivo: siempre se habia comprendido este juicio en la regla general. El artículo 7.° de la ley de 3 de Junio de 1821, despues de decretar una escepcion, dijo: «pero para pedir judicialmente cualquier ciudadano el pago de una deuda, aunque dimane de escritura pública, se intentará antes dicho juicio de conciliacion, y no aviniéndose las partes, se procederá acto contínuo al embargo de bienes para evitar todo perjuicio al acreedor.» Mas la ley moderna de Enjuiciamiento civil ha introducido una reforma en este punto declarando, que quedan esceptuados del requisito prévio de la conciliacion los juicios ejecutivos y sus incidencias. ¿Es justa esta escepcion? Los autores de la ley han creido encontrar un motivo racional para dictar esta medida. Veamos lo que dice á este propósito la Comision de codificacion en la esposicion de los motivos y fundamentos de la ley.

«En el sistema adoptado, dice, la Comision tuvo que estender las escepciones de la conciliacion á los juicios ejecutivos: en ellos no se ventila la declaracion de derechos, ni de puntos que en concepto de la ley sean litigiosos: trátase solo de que se lleven á efecto obligaciones, á que la ley da fuerza parecida á la de la cosa juzgada, aunque incidentalmente despues nazca de ellas un pleito. El acto de conciliacion, cuando se exige como prévio al juicio ejecutivo, viene á convertirse, no en cuestion de deber ó no deber, sino en un regateo, en que el deudor procura enervar la fuerza del documento ejecutivo con promesas á las veces mentidas, con dilaciones inmotivadas, y con pretensiones de rebajas que nunca se convierten contra el acree-

dor avaro é implacable, que siempre las rechaza; sino contra el acreedor accesible y noble, que, en un momento de espansion y de generosidad, se origina tal vez graves perjuicios.»

Preciso es confesar que esto es lo que acontecia muchas veces en el acto de conciliacion que se celebraba como prévio al juicio ejecutivo; pero creemos que esta consideracion no justifica la escepcion. Aunque en la mayoría de los casos sea incontestable el derecho del acreedor consignado en un título ejecutivo, no puede negarse la posibilidad de cortar el pleito en el acto de conciliacion, evitando al deudor la vejacion que este juicio trae consigo, sin que con ello se lastimen los intereses del actor: pueden fijarse plazos para verificar el pago, conciliando de este modo el interés y la comodidad de ambas partes. Además, es muy frecuente en el juicio ejecutivo alegar escepciones contra el título del acreedor; escepciones que dan lugar á una empeñada controversia, en que no es raro el triunfo del demandado. Puede haber falsedad en el título ejecutivo: puede tener contra si la prescripcion de la accion: puede estar enervado por un pacto posterior: puede ser, en fin, que el deudor tenga créditos compensables contra el acreedor, ó justos por lo menos, aunque no pueda verificarse legalmente la compensacion por falta de alguna de las circunstancias que la ley requiere. En todos estos casos, bien podrian obtenerse beneficiosos resultados del acto de conciliacion, evitándose á las partes la necesidad de seguir un pleito ruinoso, y la de promover tal vez otro despues de terminado el ejecutivo.

Esceptuado este juicio del requisito de la conciliacion, era natural que se esceptuaran tambien sus incidencias. Todas las cuestiones que surjan durante el juicio, con motivo del juicio mismo, tienen el carácter de incidentales y están comprendidas en la escepcion. Tales son las que se promuevan sobre la inclusion ó esclusion de bienes en el embargo, ó sobre su avalúo ó su venta; las que se refieran al depósito ó administracion, y aun tambien las tercerías de dominio ó de preferencia que se susciten por alguna persona estraña al juicio principal. La escepcion no alcanza al juicio ordinario, que puede promoverse despues del ejecutivo.

4.° *Interdictos.*—La naturaleza urgente de estos juicios exigia que se esceptuasen de la necesidad de intentar la conciliacion; porque si en algun caso pudiera surtir buenos efectos, seria perjudicial casi siempre. El que ha adquirido la propiedad de una finca que no posee, ó sufre perturbacion ó despojo en la tenencia de ella, tiene un derecho indisputable á que se le ponga en posesion y se le asegure en su disfrute, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse contra él respecto del dominio; y del propio modo, el que siente perjuicios con la construccion de una obra, ó teme recibirlos por el mal estado de la que se construyó, tiene derecho á reclamar que se suspenda la obra nueva, ó que se adopten medidas respecto de la obra vieja, para que cese el daño que se esperimenta ó no se cause el que amenaza. Todas estas reclamaciones son de conocida urgencia, y cualquiera dilacion que las entorpezca, infiere perjuicio. Por esta razon, se ha considerado siempre conveniente dejar espedito su curso, economizando los requisitos para su interposicion; y esto justifica plenamente la escepcion de la necesidad de intentar la conciliacion en todos estos juicios, que son los interdictos de adquirir, retener y recobrar, y los de obra nueva y obra vieja. Así se estableció por la ley de 3 de Junio de 1821, por el reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835, y últimamente por el art. 201 de la ley de Enjuiciamiento civil.

5.° *Demandas de tanteo ó de retracto.*—Admitido el principio de que las demandas de naturaleza urgente deben estar esceptuadas del requisito prévio de la conciliacion, no podia dejarse de comprender en la escepcion las del juicio de retracto, para cuya incoacion han fijado las leyes un término fatal, que no puede por lo mismo prorogarse, y que es un tanto angustioso. Por eso estuvo siempre comprendida en los casos de escepcion, y lo está tambien ahora por disposicion de la nueva ley (art. 202).

Pero nótese que esta escepcion se limita á

la interposicion de la demanda, sin estenderse á las demás actuaciones del juicio; así es que, una vez admitida aquella, queda en suspenso, mientras no se acredite que se ha celebrado ó intentado el acto de conciliacion. Y la razon es obvia: en la interposicion de la demanda de retracto hay urgencia, porque el término que la ley otorga para ella es perentorio; pero, presentada en tiempo y admitida, puede sustanciarse el juicio sin premura, y entra por consiguiente en las condiciones de todos los demás que están sujetos á la formalidad de la conciliacion.

6.° *Otras demandas de naturaleza urgente y perentoria.*—Siguiendo el mismo principio, ha comprendido la ley en una sola frase, para esceptuarlas de la necesidad de intentar la conciliacion, todas las demandas urgentes y perentorias por su naturaleza (el mismo art. 202). Corresponden á esta clase: las demandas de embargo preventivo, las de alimentos provisionales, las de depósito de personas, y generalmente, todas aquellas que la misma ley califica de actos de jurisdiccion voluntaria. Si en cualquiera de ellas se exigiera como requisito prévio el acto de conciliacion, podria inferirse perjuicio á los derechos del actor, haciendo ilusorios los efectos de su demanda con la dilacion. Hay que observar, sin embargo, que aunque no se hubiese establecido espresamente esta escepcion, existiria siempre; porque esas demandas urgentes y perentorias no constituyen verdaderos juicios. Por esta razon ha declarado la ley en el mismo artículo, que si hubiere de seguirse *pleito*, se exigirá el acto de la conciliacion ó la certificacion de haberse intentado sin efecto.

7.° *Juicios universales y sus incidencias.* —Es preciso reconocer que el acto de conciliacion es inútil en muchos casos para conseguir el fin de su institucion. Cuando por la naturaleza del juicio han de concurrir en él muchas personas con intereses opuestos, sobre la dificultad de reunirlas, existe la de lograr que vengan á un acuerdo comun. Así acontece en los juicios universales. Además, seria sumamente embarazoso el acto de conciliacion en estos juicios, por la multitud de cuestiones que en ellos suelen suscitarse. Y seria, en fin, ineficaz en muchas ocasiones respecto de las personas ignoradas que pueden tener interés en el asunto, y cuyos derechos quedarian siempre á salvo.

Por estas consideraciones, la ley de 3 de Junio de 1821 declaró, que no debia celebrarse el acto conciliatorio para promover la formacion de inventarios y particion de herencias. El reglamento provisional para la administracion de justicia repitió esta misma escepcion, y la hizo estensiva á los juicios sobre herencias vacantes. Y la ley de Enjuiciamiento civil ha completado el pensamiento comprendiendo en ella los juicios de sucesion testamentaria, ab-intestato y vincular, y los de concurso de acreedores, como tambien las incidencias de todos estos juicios (art. 201). Así pues, están esceptuadas del requisito prévio de la conciliacion las reclamaciones sobre inclusion ó esclusion de bienes en el inventario, ó sobre su avalúo, depósito y administracion; las que se refieran al mejor derecho á la sucesion; las que versen sobre la liquidacion, particion y adjudicacion; las de reconocimiento y graduacion de créditos, y generalmente, todas las que se deduzcan durante el juicio, ya se refieran á su objeto principal, ó ya á puntos incidentales, que tengan relacion mas ó menos inmediata con el asunto.

Pero además de esto, que se halla claramente espresado en la ley con el nombre genérico de *incidencias*, entendemos que están comprendidas en su espíritu otras reclamaciones que pueden intentarse por personas estrañas al juicio, y que, segun otras disposiciones de la ley misma, son acumulables al juicio universal y deben resolverse dentro de él. Tales son las demandas que se interpongan contra el heredero, despues de prevenido el juicio de testamentaría ó de ab-intestato, siempre que se deduzcan por razon de las obligaciones á que el demandado tenga que responder como sucesor del causante de la herencia, y no por las que sean peculiares á su persona independientemente de la del difunto. Lo propio debe decirse de las demandas que se deduzcan contra los bienes del ab-intestato antes de haber heredero recono-

cido y declarado. En todos estos casos existe la razon que la ley ha tenido presente para establecer la escepcion, porque todas las cuestiones que en virtud de estas demandas se promuevan, afectan á los derechos de la colectividad, y á los de las personas acaso ignoradas que puedan tener interés en el juicio, y cuya intervencion es imposible en el acto conciliatorio.

8.° *Juicios de concurso á capellanías colativas, ó sus bienes, é incidencias.*—Seria del propio modo inútil, y por tanto ocioso el acto de conciliacion como requisito prévio para promover los juicios sobre mejor derecho á la sucesion de capellanías colativas, porque en esta materia no cabe la avenencia de los interesados; como lo seria para los juicios sobre adjudicacion de los bienes que las constituyen. Por eso se hallan comprendidos unos y otros en la escepcion: y tambien lo están las cuestiones incidentales que en ellos se promuevan. Así lo habia dispuesto la ley de 3 de Junio de 1821 y lo ha confirmado la de Enjuiciamiento civil.

Pero no están esceptuadas igualmente las demandas de divorcio, á pesar de la materia sobre que versan. La separacion de los cónyuges bien puede evitarse por su propio consentimiento aun cuando exista motivo para ella. Por esta razon las declaró espresamente comprendidas en la regla general el art. 4.° de la ley precitada de 1821, y no han sido esceptuadas por ninguna otra disposicion posterior.

9.° *Juicios en que están interesados la Hacienda pública, los pósitos, propios, comunes, ó cualquiera otra clase de bienes de establecimientos públicos, de pueblos, de provincias ó del Estado.*—Ya digimos al principio de este párrafo, que el acto de conciliacion es inútil en ciertos casos, por razon de la materia, ó por las condiciones de las personas interesadas en el asunto. Por esta última razon es inútil en todos aquellos juicios en que se trate del interés de los pueblos, de las provincias ó del Estado, ó de los establecimientos públicos, como son los hospitales, hospicios, casas de espósitos, de correccion, de beneficencia y de instruccion pública, siempre que estén costeados en todo ó en parte por los fondos públicos. Las consecuencias de los pleitos en que intervenga como parte cualquiera de estos establecimientos, afectan á los intereses municipales ó provinciales, ó á los generales de la nacion, respecto de los cuales no cabe transaccion sin que se obtenga la autorizacion correspondiente del Gobierno; porque el municipio, la provincia y el Estado gozan de los beneficios que las leyes conceden á los menores de edad (ley 10, título 19, Partida, 6.°). Esta misma condicion tienen tambien los bancos nacionales, las iglesias, las cofradías autorizadas y cualesquiera obras pias. Todos se hallan especialmente protegidos por las leyes, y á todos se estiende el privilegio de no quedar obligados en virtud de transacciones celebradas sin la autorizacion correspondiente, que se concede con conocimiento de causa y prévia justificacion de su conveniencia ó necesidad.

Como consecuencia de este principio, dispuso la ley de 3 de Junio de 1821, que no debe preceder el acto de conciliacion para hacer efectivo el pago de todo género de contribuciones é impuestos, así nacionales como municipales, ni para el de los créditos dimanantes del mismo origen; y declaró, por punto general, que no es necesario intentar la conciliacion en los negocios en que no cabe avenencia de los interesados, y que á esta clase pertenecen los que ya se han mencionado. El reglamento provisional reprodujo la misma disposicion (art. 21); y la ley de Enjuiciamiento civil ha venido últimamente á sancionarla (art. 201). Pero antes que esta, lo habia hecho ya en términos mas generales la real órden de 1.° de Enero de 1847 declarando, que no es necesario intentar la conciliacion en los asuntos de que conocen los consejos provinciales, esto es, en los juicios sometidos entonces á la jurisdiccion de estos cuerpos, que tenian el carácter y atribuciones de verdaderos tribunales en los asuntos contenciosos de la administracion.

Forzoso es, sin embargo, confesar que es dudosa la utilidad de esta medida, por la cual se dispensa, ó mejor dicho, se prohibe la celebracion del acto conciliatorio en los

negocios que interesan á los pueblos, á las provincias ó al Estado; porque si es verdad que la falta de celo de sus administradores pudiera comprometer alguna vez sus derechos en una transaccion inconveniente, tambien lo es que con la prohibicion establecida se priva á esas personas jurídicas de las ventajas que pudieran reportar con una avenencia racional y justa, que cortaria en su orígen un pleito ruinoso.

Esta consideracion, derivada de las razones mismas que abonan la institucion del acto conciliatorio, no podia pasar desapercibida; y en fuerza de ella, consultando los intereses de la causa pública, se adoptó un medio supletorio para los asuntos de la Administracion; medio por el cual, al paso que se preservan los intereses públicos del riesgo que pudieran correr en manos de un administrador poco celoso, se procura la realizacion del propósito á que se dirige el acto de conciliacion. Nos referimos al requisito que por las leyes administrativas se exige como condicion prévia á toda demanda, que haya de intentarse contra la Hacienda ó corporaciones públicas; á la reclamacion en la vía gubernativa. V. **DEMANDAS CONTRA LA ADMINISTRACION**, y **CONTRA CORPORACIONES PUBLICAS**.

10. *Juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados.*— Fúndase esta escepcion en la circunstancia de no poderse obligar las personas que en ella se comprenden. Los menores de 25 años no gozan de la libre y omnímoda administracion de sus bienes, ni pueden por lo tanto transigir las cuestiones que afectan á sus derechos, porque este acto implica siempre una renuncia de mas ó menos trascendencia. En la misma condicion se hallan los incapacitados, entendiéndose por tales, para los efectos de que tratamos, los locos, idiotas y sordo-mudos, los declarados pródigos y los condenados por sentencia ejecutoria á la pena de interdiccion civil. Todos ellos están privados del pleno goce de sus derechos civiles, y seria inútil la celebracion del acto conciliatorio entre personas que no pueden llevar á cabo su objeto.

11. *Juicios contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que residan fuera del territorio de la Audiencia á que corresponda el juzgado en que deba entablarse la demanda.*—Cuando el que ha de ser demandado carece de residencia conocida, queda exento el demandante de la obligacion de intentar el acto conciliatorio, lo cual es razonable por la dificultad que el caso ofrece para que puedan reunirse los dos interesados en un mismo lugar. El ambulante, que no fija su domicilio, puede sustraerse fácilmente á la accion de su adversario, y evitar la ocasion de ser demandado. Y aunque no puede decirse lo mismo respecto del ausente que reside fuera del territorio de la Audiencia á que pertenezca el lugar donde se ha de entablar el juicio, existe tambien un motivo racional para la escepcion de que tratamos, porque no seria justo, ó por lo menos, no seria conveniente ni equitativo el precisar al demandante á sufrir las molestias y los gastos que naturalmente habia de producir la diligencia.

Una objecion, sin embargo, se nos ocurre contra esta última disposicion. Parece bien que se exima de la necesidad de intentar la conciliacion al que tenga lejos de sí á su demandado, porque es justo evitarle las dificultades que ofrece un largo viage en su busca; pero esto no se consigue con la medida adoptada, al paso que en muchas ocasiones será completamente innecesaria para lograr el fin, como se comprende por esta sencilla demostracion. Suponiendo el caso de que el lugar del juicio y el de la residencia del demandado se hallen en territorios de dos Audiencias distintas, pero confinantes, puede suceder que sea muy corta la distancia que medie entre los dos, porque es posible que estén situados en la periferia ó confines de ambos territorios. Entonces faltará la razon que ha tenido la ley para eximir al demandante de la obligacion de intentar el acto conciliatorio, y la medida es innecesaria. Mas, por el contrario, si el lugar del juicio y el de la residencia del demandado se hallan situados en los confines opuestos de un mismo territorio, distarán mucho entre sí. En tal caso, hay motivo justificado para la exencion, y sin embargo, no está comprendido en ella;

por consiguiente, la disposicion es inútil para su objeto, porque no evita la molestia que se ha propuesto evitar. Mas equitativo hubiera sido haber fijado la distancia por leguas ó kilómetros.

Antes de terminar esta seccion, parece oportuno examinar una duda importante, que se ha suscitado con motivo de las disposiciones que acabamos de esponer. Ya conocemos los diferentes casos que la ley ha esceptuado de la necesidad de intentar la conciliacion, como requisito prévio para interponer una demanda. Pero nos falta saber si esa escepcion implica una verdadera prohibicion. ¿Está prohibido por la ley el acto conciliatorio en los casos que marca como de escepcion? ¿Pueden los interesados intentar la conciliacion en esos mismos casos á pesar de la declaracion de la ley? No vacilaremos en la resolucion de esta duda. La ley no ha prohibido el acto conciliatorio para ningun caso: no ha hecho mas que dispensar de la obligacion de celebrarlo, establecida en la regla general. Si, pues, los interesados creen conveniente utilizar ese medio para terminar sus diferencias y escusar un pleito, no puede haber dificultad en ello: en su arbitrio está siempre la adopcion de medidas estrajudiciales para ventilar y resolver las cuestiones que entre ellos se susciten, en la forma que estimen mas adecuada, renunciando un privilegio que la ley les otorga, porque prilegio es la exencion de una obligacion. Pero es necesario para ello que convengan las dos partes en celebrar el acto: si así no fuere, si el demandado alegase que el caso está esceptuado de la necesidad de la conciliacion y se negare á concurrir ó á contestar ante el juez conciliador, deberá desistirse de su celebracion, porque la ley exime de ella al que no se presta voluntariamente; si bien deberá acreditarse por diligencia para los efectos que procedan.

La verdadera duda que puede ocurrir, debe referirse á los efectos del acto conciliatorio celebrado en cualquiera de los casos esceptuados por la ley. En algunos de ellos puede ser eficaz la conciliacion, al paso que en otros habria de ser forzosamente nula. Esto se halla subordinado á una regla general. Siempre que el asunto litigioso sea susceptible de avenencia por la materia y por las personas que en él se interesan, la transaccion será eficaz, como por ejemplo, cuando se trate de un interdicto, de un retracto ó de un desahucio entre personas capaces de obligarse y transigir. Pero si la naturaleza del asunto resiste la transaccion, ó las personas interesadas no se hallan en aptitud de administrar sus bienes y de renunciar sus derechos, la conciliacion será nula. Así lo seria cuando se tratase de la sucesion á una capellanía ó de cualquier negocio en que se interesare un menor ó un incapacitado; bien que en este caso, podria convalidarse la transaccion y llevarse á efecto por los medios que las leyes tienen establecidos para dar validez y eficacia á las transacciones en que intervienen personas incapacitadas.

SECCION IV.

DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LOS ACTOS DE CONCILIACION.

Todas las disposiciones legales que han establecido el medio de la conciliacion como requisito prévio de ciertas controversias judiciales, están de acuerdo en cuanto á las personas que deben intervenir en este acto. El que trata de ejercitar su derecho ante los tribunales de justicia, debe esponerlo antes en esa especie de conferencia amistosa para llenar el fin de la institucion. El que ha de responder á la pretension que en su dia se deduzca judicialmente, debe oirla primero de los labios de su adversario, por si le es posible acceder buenamente á lo que se reclama ó evitar de otro modo la controversia. Uno y otro deben acompañarse de personas que cooperen al mismo fin, proponiendo los medios que dicte la prudencia como mas apropósito para obtener una solucion pacífica. Y como complemento de esta reunion amistosa, debe intervenir en ella un funcionario público, que con la influencia saludable de su autoridad y con los recursos de su celo por la reconciliacion y la paz, induzca á los interesados á celebrar

una equitativa transaccion; como tambien otro funcionario, que estienda y autorice un acta de lo que en dicha junta se trate. Estas son las personas que deben concurrir al acto conciliatorio, y de las cuales vamos á tratar con la separacion conveniente.

§. 1.° *Demandante y demandado.*

Aunque el acto de conciliacion no tiene hoy el carácter de juicio, como dijimos anteriormente, es necesario que las partes que lo celebren, reunan ciertas condiciones que las leyes y la jurisprudencia han exigido siempre en las personas litigantes; y lejos de dispensarse algunas de esas circunstancias en el acto conciliatorio, son todavía mas indispensables en él que en los juicios, porque el objeto de la conciliacion es, como ya sabemos, la avenencia, esto es, la transaccion sobre los derechos que ejercitan el demandante y el demandado. Es, pues, preciso que uno y otro tengan capacidad para obligarse.

Siguiendo este principio, y prescindiendo de las personas que no tienen obligacion de intentar la conciliacion como requisito prévio para entablar un pleito, diremos, que solo pueden ser demandantes y demandados en el acto de conciliacion los que están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; y que por los que no se hallen en este caso, deben comparecer sus representantes legítimos. Así pues, el hijo de familia mayor de edad no puede demandar ni ser demandado por sí mismo mientras se halle constituido bajo la pátria potestad, á menos que obtenga autorizacion espresa de su padre (1); bien que si se tratare de cosa perteneciente á su peculio castrense, ó cuasi castrense podrá comparecer sin dicha autorizacion, mediante á que es considerado en tal caso como padre de familia, y tambien si hubiese de litigar contra su mismo padre. Tampoco puede celebrar el acto conciliatorio la mujer casada sin licencia de su marido, salvo el caso en que haya de litigar contra este. Y tanto el hijo de familia como la mujer casada podrán comparecer por sí, cuando, sin estar autorizados por la ley ni por el padre y marido respectivamente, hubiesen obtenido habilitacion judicial con las formalidades que prescribe la ley de Enjuiciamiento civil. Fuera de estos casos, deben ser representados en el acto conciliatorio por el padre y marido, que es la persona á quien la ley concede esta facultad.

No es necesario que las partes comparezcan personalmente para celebrar el acto de conciliacion: en este caso, como en cualquier otro en que se haya de tratar de su interés, pueden estar representadas por un procurador, es decir, por un apoderado ó mandatario con poder bastante, pues no es preciso que sea procurador de juzgados. Pero no basta que este poder sea general para pleitos: es indispensable que contenga la facultad especial de intervenir en actos de conciliacion. Así lo prescribe la ley de 3 de Junio de 1821 en su art. 10, que dijo: «En los juicios de conciliacion podrán concurrir las partes, ó personalmente ó por medio de procurador autorizado *con poder especial* al efecto.» La razon de esta última parte del precepto está al alcance de todos: en los pleitos se celebra por los litigantes un cuasi-contrato, al paso que en los actos de conciliacion se celebra muchas veces un verdadero contrato; una transaccion.

Y deben tambien identificar su persona, ó la del procurador en su caso, siempre que en el acto de conciliacion se haga cesion de créditos de la deuda del personal para pago de deudas ó por otro motivo; medida que fué preciso adoptar para evitar falsas cesiones de dichos créditos, por cuyo medio se han cometido algunas estafas, sin ser posible identificar las personas que intervinieron con nombre supuesto en el acto de conciliacion, cuando se descubrió el fraude. A dicho fin debe consignarse en el acto que el juez ó el secretario conocen á las partes, y señala-

(1) Hablamos aquí del hijo de familia conforme á nuestro antiguo y constante derecho; pero reputándose hoy emancipados los hijos legítimos desde que entran en la mayor edad, conforme al art. 64 de la ley provisional de *matrimonio civil*, de 18 de Junio de 1870, ya no se hallan en la necesidad de obtener la autorizacion de su padre para comparecer en juicio, ni de consiguiente en los actos de conciliacion.

damente al cedente; y si no las conocen, deben estas identificar sus personas con dos testigos conocidos, que han de firmar tambien el acta; y de otro modo no puede tener efecto la conciliacion en que se hagan tales cesiones (1).

§. 2.° *Hombres buenos.*

Para obtener los beneficiosos efectos del acto conciliatorio, convenia dar intervencion en él á personas estrañas en la cuestion que, sin participar del interés que pudiera inspirar el asunto á los litigantes, desempeñaran con ánimo sereno y desapasionado el cargo de mediador. La Constitucion de 1812 dió á estas personas el nombre de hombres buenos, esto es, hombres de honradez y probidad, y dotadas sobre todo de gran prudencia para moderar las exageradas pretensiones de las partes contendientes y reducirlas á un acomodamiento. El reglamento provisional prescribió tambien su intervencion. Y la ley de Enjuiciamiento civil lo ha dejado á su vez establecido diciendo: «Tanto los demandantes como los demandados se presentarán acompañados cada cual de un hombre bueno (artículo 210).»

Esta locucion imperativa persuade de que la intervencion de los hombres buenos es indispensable en el acto de que hablamos: no es posible prescindir de ellos; y tanto, que si dejaran de intervenir, careceria de eficacia el acto, en nuestro concepto, para el efecto de admitir despues la demanda en el juicio. Sin embargo, si terminase por convenio de las partes, no seria este nulo por la falta de hombres buenos, porque siempre significaria la espresion de la voluntad de los interesados, que es el requisito esencial de la avenencia. El mismo convenio probaria, que para aquel caso, habia sido innecesario el oficio de los hombres buenos.

Cada una de las partes debe nombrar un hombre bueno; y si fueren varios los demandantes ó los demandados, cada uno de ellos podrá llevar el suyo. Pero esto no es preciso: la ley solo exige uno por cada parte.

(1) Real órden de 4 de Octubre de 1801.

Pueden ser hombres buenos todos los españoles que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (art. 211). No pueden serlo, por tanto, los menores de 25 años, los locos, los idiotas, sordo-mudos y pródigos, ni los sentenciados á la pena de interdiccion civil; y tampoco las mujeres.

Y conviene tener presente, para desterrar una preocupacion muy comun, que el oficio de hombre bueno no es el de defensor de la parte por quien interviene, sino simplemente el de conciliador; de modo que su interés debe ser igual para una y otra parte, y su único fin la pacificacion. Inspirados en este sentimiento, podrán los hombres buenos cumplir dignamente la importante mision que les confia la ley.

§. 3.° *Juez competente.*

No es menos importante la intervencion del funcionario público á quien la ley encarga la presidencia del acto de conciliacion: el juez conciliador. La Constitucion de 1812 dispuso que el alcalde de cada pueblo ejerciera en él el oficio de conciliador (art. 282), y esto mismo prescribieron otras disposiciones posteriores. El reglamento provisional de 1835 mandó tambien, que en cada pueblo el alcalde y los tenientes de alcalde ejercieran dicho oficio (art. 22). Y últimamente, instituidos los jueces de paz y sus suplentes por real decreto de 22 de Octubre de 1855, se les confirió por la ley de Enjuiciamiento civil la facultad de conocer de los actos de conciliacion.

Así las cosas, era necesario determinar la competencia respectiva de los jueces de paz para la celebracion de los actos de conciliacion en los diferentes casos que pueden ocurrir, como siempre estuvo determinada la de los demás jueces; y dando por supuesta esta necesidad, la misma ley anticipó ya una disposicion, diciendo: «Antes de promover un juicio, debe intentarse la conciliacion *ante el juez de paz competente* (art. 201).» Y mas adelante dijo: «Fuera de los casos de sumision espresa ó tácita, el juez de paz competente será, á prevencion, el del domicilio del

demandado, ó el de su residencia (art. 204).»

Aunque la competencia del juez se deriva de la ley, esta ha reconocido como primera causa de ella la voluntad de las partes, siempre que se sometan á juez competente para conocer de la materia, objeto de la contienda; y por eso se declaró, que es competente para entender en los actos de conciliacion, en primer término, el juez de paz á quien se sometan los interesados espresa ó tácitamente. Y solo cuando no existe sumision espresa ni tácita, cuando los interesados no manifiestan de un modo ó de otro su voluntad, viene á regir la disposicion de la ley, que determinaba el fuero del domicilio ó el de la residencia del demandado, á eleccion del demandante.

Pero esta disposicion de la ley de Enjuiciamiento civil ha sido modificada por la del artículo 300 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial de 15 de Setiembre de 1870, la cual ha variado tambien la denominacion de los jueces de paz, dándoles la de *jueces municipales*, con un solo suplente, en vez de los dos que antes tenian. Dicho art. 300 dice así: «Los jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, serán los *únicos* competentes para autorizar los actos de conciliacion que ante ellos se promuevan, en los casos que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos. En las poblaciones en que hubiere mas de un juez municipal, el primero por cuya órden se haga la citacion, será el competente.»

Si los dos jueces designados por esta disposicion, fueran los *únicos competentes*, como ella dice, la consecuencia indeclinable seria que ya no pueden las partes someterse espresa ni tácitamente á otro juez municipal, lo cual, sobre ser contrario al principio consignado en los arts. 299 y 303 de la propia ley, podria ocasionar, en algun caso, perjuicios considerables á los interesados, sin ninguna ventaja para la administracion de justicia.

Por estas consideraciones, sin duda, el Tribunal Supremo ha fijado ya la inteligencia y estension de dicho artículo, en el sentido de que solo ha modificado el 204 de la ley de Enjuiciamiento civil *en la preferencia que este daba á la prevencion* (1). Luego queda subsistente en cuanto á la sumision espresa ó tácita, que hoy, lo mismo que siempre, podrán hacer las partes á otro juez de la propia clase. Prevaleciendo esta jurisprudencia, arreglada mas al espíritu que á la letra de la ley, se salvan los inconvenientes de la citada disposicion.

Por consiguiente, fuera de los casos de sumision espresa ó tácita, que dan la preferencia para conocer del negocio, no puede hoy el demandante elegir entre el juez del domicilio y el de la residencia del demandado: solo podrá acudir á este en defecto de aquel, y como la palabra *defecto* no puede referirse al juez, sino al domicilio, habrá de entenderse que únicamente podrá acudirse al juez municipal de la residencia del demandado á conciliacion, cuando este no tenga domicilio fijo y conocido. A la vez que nos parece inconveniente esta reforma, porque dificultará la celebracion de los actos de conciliacion, creemos acertada, por la razon inversa, la declaracion hecha en la última parte del citado artículo 300, segun la cual, en las poblaciones en que hubiere más de un juez municipal, todos tienen competencia á prevencion.

Las palabras *únicos competentes*, de que usa la ley, dan tambien lugar á otra duda, que antes no existia. ¿Podrá el juez de paz ó municipal, que se crea incompetente, abstenerse ó inhibirse de oficio, negándose á au-

(1) Auto de la Sala primera del Tribunal Supremo, de 5 de Diciembre de 1870, decidiendo una competencia entre el Juez municipal de Competa y el de Belmez, sobre el conocimiento de un acto de conciliacion. Dice así:

«Considerando que segun el artículo 300 de la ley provisional para la organizacion del poder judicial, *que solo ha modificado el 204 de la de Enjuiciamiento civil en la preferencia que éste daba á la prevencion*, los Jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, son los únicos competentes para autorizar los actos de conciliacion que ante ellos se promuevan:

Considerando que, esto supuesto, en tanto podrá conocer el de la residencia en cuanto se ignore ó falte el de la vecindad; y en el caso de que se trata consta que los demandados son vecinos de Peñarroya, comprendida en el distrito municipal de Belmez.»

torizar el acto de conciliacion que ante él se solicite? No podrá hacerlo prevaleciendo la jurisprudencia antes indicada de que, ahora lo mismo que antes, las partes están facultadas para someterse al juez que tengan por conveniente; pero si se entendiera dicho artículo 300 en su sentido literal de que la competencia se ha limitado al juez municipal del domicilio, y en su defecto al de la residencia del demandado á conciliacion, seria lo lógico que cuando esta se intentara ante cualquiera otro juez, que no fuese uno de los dos indicados, pudiera el requerido negarse de oficio á acordar la citacion y á conocer del asunto, previniendo al demandante que acudiese ante el competente. Sin embargo, creemos que, aun en este caso, seria improcedente esa resolucion, porque chocaria con otras disposiciones de la propia ley de organizacion judicial.

Segun esta, los jueces no pueden inhibirse de oficio sino cuando concurre alguna de las causas que dan lugar á la recusacion, entre las cuales no se halla la incompetencia. Tampoco autoriza las cuestiones de competencia en los actos de conciliacion, ni que se promuevan de oficio en los asuntos civiles, conforme á la jurisprudencia que venia rigiendo sobre este particular. Y además, en el art. 301 dispone que «promoviéndose cuestion de competencia ó de recusacion del juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y con certificacion en que conste, podrá el actor entablar la demanda ó querella que corresponda.» De todo esto, y de la regla general de competencia en lo civil, consignada en el art. 303, segun la cual la tiene preferente el juez, á quien se sometan las partes espresa ó tácitamente, siempre que tenga jurisdiccion para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado, se deduce, en nuestro concepto, que el juez municipal, ante quien se provoque la conciliacion, no puede inhibirse de oficio por creerse incompetente; sino que debe en todo caso acordar la citacion del demandado: si éste comparece, y se presta á celebrar la conciliacion, el acto será válido; y si no comparece, ó si, compareciendo, alega la escepcion de incompetencia, se tendrá el acto por intentado sin mas trámites, y habilitado el actor para entablar su demanda ó querella, acreditando dicho incidente con la certificacion oportuna. No vemos otro medio de conciliar las disposiciones antedichas. Aun volveremos á hablar de esta materia en el §. 3.° de la seccion V.

Puede suceder que sea demandante ó demandado el mismo juez de paz, ó que tenga incompatibilidad para conocer por cualquier otro motivo, y tambien que la cuestion sea entre el juez de paz y su suplente: en tales casos, ¿ante quién deberá celebrarse la conciliacion? La jurisprudencia que ha regido hasta ahora lo tenia resuelto, de acuerdo con el art. 10 del Real decreto de 22 de Octubre de 1858. En todos estos casos debia conocer de la conciliacion el suplente que no tuviese incompatibilidad, y en su defecto el alcalde y los tenientes del mismo; y en los pueblos donde hubiese mas de un juez de paz, debia el demandante acudir, primero, al mas antiguo de la misma clase, siguiendo el órden numérico; á falta de jueces hábiles, á los suplentes en la misma forma, y por último á los alcaldes ó tenientes. Tambien ha sido reformada esta jurisprudencia por la nueva ley de organizacion judicial de 15 de Setiembre de 1870, la cual, despues de establecer en el art. 65, que «en cada juzgado municipal habrá un juez suplente que reemplazará al propietario en los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusacion, ó de cualquiera otro impedimento legítimo del propietario,» en el 68 ordena lo siguiente: «Cuando quedaren vacantes simultáneamente los cargos de juez municipal y de suplente, ó por cualquiera de las causas espresadas en la ley no pudiere ninguno de ellos desempeñar sus funciones, serán reemplazados por los que hubiesen sido jueces municipales en los años inmediatamente anteriores, por órden inverso, con esclusion de los suplentes.»

Combinando estas disposiciones con la del art. 300 de la propia ley, resulta que en el dia, cuando sea demandante ó demandado el

juez de paz ó municipal, si hay en la poblacion otros jueces de la misma clase, deberá acudirse á cualquiera de éstos para que autorice el acto de conciliacion, puesto que todos tienen competencia á prevencion; pero si no los hubiere, deberá acudirse al suplente del mismo juzgado; y si se hallase vacante esta plaza, ó el suplente tuviese impedimento para conocer, bien porque la cuestion sea entre él y el juez propietario, ó por cualquier otro motivo, deberá celebrarse la conciliacion ante el juez de paz ó municipal del año anterior, y en su defecto ante el que le haya precedido, y así sucesivamente hasta encontrar uno hábil de los años anteriores, por órden inverso, con esclusion de los suplentes en todos estos casos.

§. 4.° *Del secretario.*

El cargo de secretario de los juzgados de paz fué creado al organizarse estos juzgados por el Real decreto de 22 de Octubre de 1855, para el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil del mismo mes y año. Como anteriormente no existía este cargo, tanto la Constitucion de 1812, como las demás disposiciones anteriores á dicha ley, solo dieron intervencion en los juicios de conciliacion á los alcaldes y hombres buenos, y aun en el art. 23 del reglamento provisional se declaró espresamente que no habia necesidad de que asistiera escribano. Así es que entonces estas actuaciones eran libres de derechos, y solo podian exigirse dos reales á cada parte que no fuese pobre, para atender al necesario gasto de libro y escribiente. Pero en el dia es indispensable la intervencion de dichos funcionarios, por exigirla la ley, los cuales perciben los derechos que para estas actuaciones están señalados en los aranceles vigentes, y que pueden verse en la parte legislativa.

La nueva ley de organizacion del poder judicial conserva dichos funcionarios, como ausiliares de los juzgados municipales, y por el art. 494 dispone, que «en cada juzgado municipal habrá un secretario, *que autorizará todos sus actos*, y un suplente, para los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusacion ú otro cualquier impedimento del secretario.» De consiguiente, este funcionario ha de autorizar con su presencia y con su firma todas las actuaciones de los actos de conciliacion, como estaba ya prevenido por el art. 3.° del Real decreto de 22 de Octubre de 1838, en la forma que espondremos en las dos secciones siguientes, y no serán válidas de otro modo.

Además de las funciones judiciales, antes indicadas, respecto á la materia de que tratamos, dichos secretarios son responsables de la conservacion de los libros en que se asienten los actos de conciliacion y de las demás actuaciones que á estos se refieran. Al fin de cada bienio deben hacer entrega de dichos libros en el respectivo juzgado de primera instancia, recogiendo resguardo, sin el cual no podrán eximirse de la indicada responsabilidad (1).

SECCION V.

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS ACTOS DE CONCILIACION.

Aunque la conciliacion haya perdido en su fondo el carácter de juicio en virtud de la reforma hecha por la ley de Enjuiciamiento civil, no por eso ha disminuido, antes bien ha aumentado la solemnidad de sus procedimientos, con la intervencion del secretario, que certifica del acto, segun hemos dicho. Esta circunstancia ha caracterizado mas la índole judicial de tales actuaciones. La ley citada las ha determinado concreta y circunstanciadamente, desde la demanda ó solicitud para intentar la conciliacion, hasta la terminacion del acto, en la forma que vamos á esponer.

§. 1.° *Demanda y citacion.*

Antes de la ley de Enjuiciamiento civil, para que se celebrara el juicio de concilia-

(1) Arts. 12 y 13 del Real decreto de 22 de Octubre de 1855.

cion, no debia preceder peticion por escrito: bastaba que se solicitara verbalmente para que el alcalde estuviese obligado á mandar citar desde luego al demandado, evitando dilaciones (1). Este sistema, aunque mas espedito, tenia el inconveniente de que las mas veces el demandado comparecia sin saber el objeto de la demanda, y por consiguiente sin la preparacion necesaria para demostrar su derecho, siendo el resultado que, ó se limitaba el acto de conciliacion á una pura fórmula, ó tenia que prorogarse para otro dia á fin de que, en vista de los documentos y defensa del demandado, pudieran los hombres buenos y el juez conciliador ejercer sus funciones con el debido conocimiento de causa. Estos inconvenientes se han evitado con el sistema adoptado por la citada ley de Enjuiciamiento.

Segun el art. 205 de la misma, el que intente el acto de conciliacion debe acudir al juez de paz, presentándole dos papeletas iguales, ó sea una misma por duplicado, firmadas ambas por el propio demandante, ó por un testigo á su ruego si no pudiere ó no supiere firmar, en cuyas papeletas ha de espresarse: el nombre, profesion y domicilio del demandante y del demandado: la pretension que se deduzca, ó sea, el objeto de la demanda y la razon ó título en que se funde, espresado todo brevemente, pero con claridad y precision; y la fecha en que se presenten en el juzgado. Si el demandante comparece por medio de procurador ó apoderado, habrá de espresarse tambien el nombre de este, y hacer relacion del poder, exhibiéndolo además. Estas papeletas deben estenderse en papel comun, lo propio que las demás actuaciones anteriores á la comparecencia para el acto de conciliacion (2).

Presentadas las papeletas, debe examinarlas el juez de paz para ver si están ó no arregladas á la ley: no estándolo, deberá devolverlas al demandante para que las rehaga, ó prevenirle que pidiendo en forma se proveerá. Si contienen todos los requisitos antes espresados, en el mismo dia en que se presenten, ó en el siguiente hábil, el juez de paz mandará citar al demandado, señalando el dia, hora y local en que ha de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique esta á la brevedad posible. Entre la citacion y la comparecencia deberán mediar al menos veinticuatro horas; bien que podrá el mismo juez reducir este término, á solicitud de cualquiera de las partes, si hubiere justa causa para ello (art. 206). No espresa la ley cuáles han de ser las causas que deben concurrir para que se adopte esta medida, sino que deja su apreciacion al prudente juicio del juez; pero siempre debe ser *justa* la causa que se alegue, esto es, suficiente para justificar la reduccion del término, que es una relajacion del precepto terminante de la ley. La providencia para la citacion se estenderá á continuacion de la demanda en una de las dos papeletas, y en su caso se espresará en ella la causa justa que haga necesaria la reduccion del término antes indicado.

El secretario del juzgado debe notificar sin dilacion al demandado la providencia de citacion, bien por sí mismo, ó por medio de otra persona en quien delegue esta diligencia, pues la ley le faculta para hacer esta delegacion, la cual suele conferirse al portero del propio juzgado. Dicha notificacion ha de hacerse, leyendo íntegramente la providencia al demandado, y entregándole en el acto, en lugar de la copia de la misma, el duplicado de la papeleta, despues de haber consignado en ella el secretario, bajo su firma, el juez que manda citar, y el dia, hora y lugar en que se ha de verificar la comparecencia. En el otro ejemplar de la papeleta, que es el que contiene la providencia, debe estenderse la diligencia de notificacion, que ha de firmar el demandado con el secretario ó su delegado. Si el interesado no supiere ó no pudiere firmar, lo hará á su ruego un testigo; y si no quisiere firmar, ó si, no pudiendo hacerlo, se negare á presentar testigo que lo verifique, firmarán dos testigos, requeridos al efecto por

(1) Art. 3.° de la ley de 3 de Junio de 1821, restablecida por la de 27 de Enero de 1837.

(2) Circular de la Direccion de Rentas estancadas de 20 de Mayo de 1858, y Real decreto de 12 de Setiembre é instruccion de 26 de Octubre de 1861, sobre papel sellado.

el secretario ó su delegado (art. 207). Tambien debe notificarse al demandante la providencia, entregándole copia de ella y estendiendo la correspondiente diligencia en la misma papeleta, que quedará archivada en el juzgado.

Si el demandado se hallare ausente del pueblo en que se ha de celebrar el acto de conciliacion, será llamado por medio de oficio dirigido al juez de paz del lugar donde resida (art. 208). Y dispone tambien la ley para este caso, que en el oficio se inserte íntegramente el contenido de la papeleta presentada por el demandante; pero en la práctica se cumple este precepto de la ley, insertando en el oficio la providencia de citacion y acompañando el duplicado de la papeleta para que se entregue al demandado. En tales casos, para fijar el dia en que se ha de verificar la comparecencia, debe tenerse en cuenta la distancia entre ambos pueblos y la mayor ó menor facilidad de las comunicaciones.

Recibido el oficio por el juez de paz del pueblo donde se halla el demandado, y acordado su cumplimiento, se practica la citacion por el secretario, ó por la persona que este delega, en la forma antes espuesta, entregando al notificado la papeleta; y estendida y firmada la diligencia á continuacion del oficio, se devuelve al juzgado que lo espidió, en el cual queda archivado con la papeleta original.

Al prescribir la ley en su artículo 207 la forma en que se ha de practicar la citacion para el acto conciliatorio, dice que el secretario del juzgado, ó la persona que él delegue, notificará la providencia de citacion al demandado, arreglándose á lo que se previene en los artículos 21 y 22 respecto á todas las notificaciones. Pero estos dos artículos solo tratan de las notificaciones que se hacen á las partes en su persona; y como puede acontecer, y acontece con frecuencia, que el demandado intente sustraerse para evitar la citacion personal, parecia natural que la ley hubiera previsto este caso. Y lo ha previsto en efecto, pues el artículo 23, que es de aplicacion general, ordena lo que ha de practicarse. Creemos por tanto que, con arreglo á él, deberá hacerse la notificacion por cédula, sin necesidad de mandato judicial, si á la primera diligencia en busca no fuese habida la persona á quien se vá á notificar. Esta cédula, en que se insertará la providencia de citacion, con la papeleta de la demanda se entregará á la mujer del demandado, ó á sus hijos, parientes que vivan en su compañía, criados ó vecinos, estendiéndose diligencia de ello en la papeleta original, que firmará el que reciba la cédula, y no sabiendo ó no queriendo, uno ó dos testigos, segun antes se ha dicho. La citacion hecha en esta forma deberá producir los mismos efectos que la practicada en la persona del demandado.

Así como es indispensable la citacion cuando el acto tiene lugar á peticion del demandante, la creemos escusada é innecesaria en el caso, no prohibido por la ley y consignado espresamente en algunos códigos estranjeros, de que ambas partes de comun acuerdo comparezcan voluntariamente ante el juez de paz á celebrar el acto de conciliacion. Y no es raro el caso: á veces los interesados transijen sus diferencias amistosamente, y para que conste de una manera auténtica, convienen en consignar de ese modo las bases ó condiciones de la transaccion. En tales casos creemos un deber del juez de paz prestarse á celebrar la conciliacion sin mas trámites, y si por otras ocupaciones urgentes no pudiese ser acto contínuo, dirá verbalmente á las partes el dia y hora en que hayan de comparecer con tal objeto.

Indicaremos, por último, que las diligencias que quedan espuestas, como todas las demás que ocurran en los actos de conciliacion, inclusa la comparecencia, han de verificarse en dias y horas hábiles, bajo pena de nulidad, conforme á lo prevenido en los artículos 8, 9 y 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en el 889 de la de organizacion judicial. Solo habilitando los dias y horas inhábiles, lo que podrá hacer el juez de paz cuando hubiere causa urgente que lo exija, podrán practicarse en ellos dichas diligencias. Estas tienen el carácter de actuaciones judiciales, y están por tanto comprendidas en los citados artículos y en el siguiente de cada una

de dichas leyes. Confírmalo tambien el artículo 206 de la de Enjuiciamiento civil, al ordenar que el juez de paz dicte en dia hábil la providencia de citacion. El 23 de la de Enjuiciamiento mercantil disponia que pudieran celebrarse en dias feriados: esto nos parece mas conforme á la índole del acto, y de conveniencia notoria; pero no lo permite la legislacion actual, como hemos dicho.

§. 2.° *Comparecencia y celebracion del acto.*

Practicada la citacion del demandado en la forma espuesta en el párrafo anterior, debe aquel concurrir, lo propio que el demandante, ante el juez de paz para la celebracion del acto conciliatorio. La ley de Enjuiciamiento civil lo ha ordenado terminantemente diciendo: «Los demandantes y demandados están obligados á comparecer en el dia y hora señalados (art. 209).» El demandante debe cumplir el compromiso que contrajo al solicitar la citacion del demandado; y éste, por respeto y obediencia á la autoridad, debe acudir á su llamamiento, á menos que se hallaren el uno ó el otro impedidos de hacerlo por justa causa. Si alguno de ellos no compareciere, ni manifestare la causa que se lo impida, se dará el acto por terminado, y por intentada la conciliacion, condenándole en las costas y además en una multa de 6 á 60 reales, segun las circunstancias de la persona; y si alegare justa causa que le impida comparecer, se hará nuevo señalamiento de dia y hora para la comparecencia. En aquel caso, segun los arts. 214 y 215 de la citada ley, debe hacerse constar, en el libro de actos de conciliacion que debe llevar el secretario del juzgado, por diligencia, que suscribirán el juez de paz y los concurrentes, haberse dado por terminado, y con mas propiedad por intentado, el acto de conciliacion, á que no hayan concurrido los interesados ó alguno de ellos, y la entidad de la multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia, dándose certificacion al interesado que la pida, lo cual basta para entablar la correspondiente demanda.

Dos novedades ha introducido sobre este punto la ley de Enjuiciamiento civil. El artículo 26 del reglamento provisional para la administracion de justicia, y el 9.° de la ley de 3 de Junio de 1821, restablecida en 1837, ordenaron la segunda citacion del demandado, en el caso de que no compareciese á la primera, conminándole con una multa de 20 á 100 reales; y si aun así no obedeciese, debia darse por terminado el acto, librando certificacion al demandante de haber intentado el medio de la conciliacion, y de no haber tenido efecto por culpa del demandado, y declarando á este incurso en la multa con que se le conminó. La ley de Enjuiciamiento civil ha suprimido esta segunda citacion, como hemos visto, dando por supuesto que el que no comparece á la primera, manifiesta tácitamente su voluntad de no querer avenencia de ninguna clase, y en tal supuesto tiene desde luego por intentada la conciliacion, y castiga la rebeldía con la multa de 6 á 60 reales y las costas.

Segun aquellas disposiciones, solo podia darse por intentado el acto cuando no comparecia el demandado: no estaba prevista la falta de comparecencia del demandante, la cual no producia otro efecto que quedar las cosas como si no se hubiera intentado la conciliacion, pagando éste las costas, y teniendo que intentarla de nuevo para entablar el pleito. La ley de Enjuiciamiento civil ha igualado sobre este punto la condicion de ambas partes, y esta es la otra novedad que hemos indicado. Cualquiera de ellas que no comparezca en el dia y hora señalados, incurre en la multa antedicha, y se da el acto por terminado condenándole en las costas. Por este medio se ha convertido la conciliacion en una pura fórmula, y valiera mas haberla dejado francamente á voluntad del demandante, como lo queda en efecto. Este cumple el precepto de la ley presentando las papeletas para la citacion de su contrario, y elude su objeto no concurriendo al acto, puesto que en este caso ha de darse por intentada la conciliacion, y queda habilitado para entablar la demanda con solo pagar una pequeña suma por multa y costas. No se llena así el fin de

esa institucion, que tantos encomios ha merecido.

El mismo efecto produce la falta de comparecencia de ambas partes, como se infiere de los arts. 214 y 215 anteriormente citados. De este hecho lo que lógica y naturalmente se deduce es, que los interesados han arreglado amistosamente ó aplazado sus diferencias, y en tal concepto debiera quedar el asunto sin ulterior resultado, ó como no intentado el acto, segun antes sucedia. Pero dichos artículos previenen que se haga constar por diligencia en el libro de actas de conciliacion, que ésta no ha tenido efecto y se ha dado por terminado el acto, en el caso de no comparecer ninguno de los interesados, lo propio que cuando deja de hacerlo alguno de ellos, con espresion de la multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia, y que se dé certificacion de ello al interesado ó interesados que la pidan. Repetimos que no se llena de este modo el objeto y fin de la conciliacion. Podria admitirse que en tales casos se impusiera á cada parte la multa y las costas por mitad; pero quedando el demandante obligado á intentar de nuevo el acto para llevar la cuestion á los tribunales. Como la multa se impone por la falta de comparecencia, deben librarse de ella las partes si hacen presente al juez de paz que han convenido en aplazar ó no llevar adelante el negocio.

El art. 209 antes citado dice á su final, que el juez de paz *hará efectiva* la multa, lo cual, prescindiendo de la impropiedad en el lenguaje, se ha entendido y se entiende en el concepto de que corresponde exigir la multa en todo caso al mismo juez de paz, que la hubiere impuesto, como único competente para ello. En este sentido se habia fijado la jurisprudencia, no obstante la duda nacida del art. 9 de la ley de 3 de Junio de 1821, que prevenia, que cuando el incurso en la multa tuviera fuero privilegiado, pasara el alcalde certificacion de la condena al juez respectivo para que la exigiese desde luego. De todos modos ya no puede hoy haber lugar á esta duda, desde que por el decreto de 6 Diciembre de 1868, que tiene fuerza de ley, se estableció la unidad de fueros. En todo caso corresponde exigir dicha multa al mismo juez de paz que la impuso. Ha de pagarse por medio del papel creado para ello. Contra la providencia del juez de paz, imponiéndola, no se dá recurso alguno.

Espuesto ya cuanto se refiere al caso en que deje de comparecer alguna de las partes citadas á conciliacion, veamos el procedimiento que ha de emplearse para la celebracion del acto, cuando ambas comparezcan en el dia y hora señalados. Si se comparan las diferentes disposiciones insertas en la *parte legislativa*, se verá que este procedimiento ha sido siempre sustancialmente igual al que establece la ley de Enjuiciamiento civil, escepcion hecha de la providencia conciliatoria, que antes debia dictar el juez de paz, y que esta ley ha suprimido, y de la intervencion del secretario del juzgado, que exije la misma para que certifique del acto, segun ya hemos dicho. Nos limitarémos, por tanto, á esponer el indicado procedimiento, segun la citada ley lo establece y como se halla vigente.

Para celebrar el acto de concillacion deberá constituirse en audiencia pública el juez de paz, asistido de su secretario, en el local destinado para ejercer sus funciones. Ante ellos se presentarán tanto el demandante como el demandado, acompañados cada cual de su hombre bueno, cuyo cargo pueden desempeñar todos los españoles que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles, como ya se ha dicho (1). Si alguno de ellos comparece por medio de procurador ó apoderado, lo primero será exhibir el poder que legitime su personalidad, á fin de que se tome nota para insertarla en el acta. Hecho esto en su caso, se procederá á la celebracion del acto en la forma siguiente:

«Comenzará el demandante esponiendo su reclamacion, y manifestando los fundamentos en que la apoya. Contestará el demandado lo que crea conveniente, y podrá hacer tambien manifestacion de cualquier documento en que funde sus escepciones. Despues de la contestacion, podrán los interesados replicar

(1) Arts. 210 y 211 de la ley de Enjuic. civil.

y contrareplicar, si quisieren. Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres buenos y el juez de paz procurarán avenirlos. Si no pudieren conseguirlo, se dará el acto por terminado.»

Esto es lo que dispone testualmente el artículo 212 de la ley citada, y poco tendremos que añadir para su recta aplicacion. Es de suponer que la pretension del demandante ha de ser la misma que consignó en la papeleta para la citacion, pudiendo ampliarla y fundarla como crea conveniente: si variase esencialmente su reclamacion, no podria tener efecto el acto por no haber precedido la citacion prevenida por la ley, á no ser que el demandado se prestase á contestar esa nueva demanda, ó á que se tenga por intentada la conciliacion para ella; de suerte que, en nuestro concepto, el juez no puede negarse por dicho motivo á la celebracion del acto, sin la oposicion ó reclamacion del demandado.

Este no está obligado á contestar categóricamente: contestará *lo que crea conveniente*, dice la ley, y puede convenirle encerrarse en una prudente reserva, limitándose á manifestar que no conviniéndole avenencia de ninguna clase por carecer de todo derecho el actor, se reserva el suyo para esponerlo cuando sea demandado en el juicio correspondiente. Con esto se llena el objeto del acto, y queda el demandante habilitado para entablar en forma su demanda.

Una y otra parte pueden manifestar ó exhibir los documentos en que funden sus respectivas pretensiones; pero no tienen obligacion de hacerlo. Convendrá, sin embargo, que los manifiesten siempre que, por el convencimiento que puedan producir en el ánimo de la parte contraria, lo estimen conducente para la realizacion de la avenencia. La ley no autoriza otro medio de prueba, ni tampoco seria propia de la índole del procedimiento. Esto no obstante, cuando una parte defiera al juramento de la otra, si ésta se presta á ello, creemos que el juez de paz debe recibirlo, porque seria un medio de avenencia, que terminaria el litigio.

Luego que las partes han espuesto lo que han creido conveniente, replicando y contrareplicando si quisieren, entran los hombres buenos y el juez de paz á ejercer sus funciones conciliadoras. Ya hemos dicho que aquellos no intervienen con el carácter de defensores de la parte que los ha elegido; sino con el de conciliadores. Su mision es procurar la avenencia de los interesados, proponiéndoles á este fin los medios mas equitativos y convenientes. Lo propio debe hacer el juez de paz, teniendo mucho cuidado de no ejercer coaccion moral ni material de ninguna clase. Y si con sus prudentes consejos y exhortaciones no pudiesen conseguir la avenencia, dará el juez por terminado el acto, lo mismo que cuando se obtenga por este medio la conciliacion y terminacion consiguiente de la contienda. El secretario debe limitarse á la redaccion y estension del acta, sin tomar parte en la discusion.

En estos actos pueden transigir los interesados sus cuestiones del modo que estimen conveniente, lo propio que podrian hacerlo por escritura pública ó en otra forma legal. Tales convenios, siempre que sean lícitos, son ejecutivos, y han de llevarse á efecto en la forma que espondremos en la seccion VII. Tambien pueden convenir en someter sus diferencias al juicio de árbitros ó de amigables componedores: en tal caso no basta consignar el nombramiento de estos en el acta de la conciliacion, como antes se practicaba, puesto que hoy es necesario que se formalice el compromiso en escritura pública, bajo pena de nulidad (1). De consiguiente, dicho convenio producirá el efecto de quedar obligadas las partes al otorgamiento de la escritura de compromiso. Si convinieren en la constitucion de una hipoteca especial para asegurar el pago de la cantidad reclamada ó de la obligacion convenida, se entenderá que queda el deudor obligado al otorgamiento de la correspondiente escritura para la constitucion y registro de la hipoteca, pues de otro modo no puede esta perjudicar á tercero, segun lo prevenido en el art. 146 de la Ley Hipotecaria (2). Y si con-

(1) Art. 773 y 821 de la ley de Enjuic. civil.
(2) Real órden de 13 de Diciembre de 1867.

vinieren en la cesion de algun crédito de la deuda del personal en pago de la cantidad reclamada, para que surta efecto dicha cesion, ha de identificarse en la misma acta de conciliacion la persona de los interesados, en la forma que se espuso en el §. 1.° de la seccion IV.

Todo lo ocurrido en el acto de conciliacion, haya ó no avenencia, debe hacerse constar sucintamente en un acta, que redactará el secretario del juzgado, estendiéndola en un libro que debe llevar al efecto (1). En dicha acta, que deberá redactarse y estenderse en el mismo acto, se espresará el pueblo y fecha en que tenga lugar; el juez ante quien se ha celebrado el acto; el nombre, vecindad y oficio ó profesion del demandante y del demandado, y el del apoderado ó apoderados en su caso, como tambien la fecha del poder y nombre y residencia del notario que lo haya autorizado; y el nombre de los hombres buenos. Se hará una sucinta relacion de la demanda, con espresion de los documentos que se hayan exhibido por el demandante; lo propio respecto de la contestacion y documentos que hubiese manifestado el demandado, y tambien de la réplica y dúplica, en su caso. Se mencionará la exhortacion de los hombres buenos y del juez de paz á la conciliacion; y por último, se hará constar el resultado, con espresion de los términos y condiciones de la avenencia, si la hubiere habido, espresándolos con claridad y precision para evitar nuevas cuestiones. Esta acta, despues de leida y aprobada, y salvadas las enmiendas si las hubiere, será firmada por todos los concurrentes, esto es, por el juez de paz, por los hombres buenos y las partes, por los testigos que identifiquen la persona de los interesados en su caso, y por el secretario, el cual certificará de la verdad y exactitud de lo consignado en la misma. Si alguno de los concurrentes no sabe, ó no puede firmar, lo hará un testigo á su ruego (1). Esta firma es un requisito esencial para la validez y eficacia del acto, como tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia (2).

Corresponde al juez de paz presidir y dirigir el acto. Ni las partes ni los hombres buenos deben hacer uso de la palabra sin su permiso, la que les concederá por su órden; y si bien debe impedir que divaguen fuera de la cuestion, y que se empeñen en cuestiones ó disputas que solo conducen á exasperar mas los ánimos, habrá de concederles la latitud necesaria para que se pongan de acuerdo sobre los hechos y lleguen á la apetecida avenencia. Tambien debe el mismo juez mantener el buen órden en estos actos, amonestando y aun corrigiendo con multa hasta 20 pesetas al que lo turbare ó le faltare al respeto y consideraciones debidas, y procediendo á la instruccion de la correspondiente sumaria y á lo demás que haya lugar, si el hecho llegase á constituir delito ó falta (3).

Los interesados tienen derecho á que se les dé certificacion del acta de conciliacion, cuyo documento es necesario para pedir la ejecucion de lo convenido, si hubo avenencia; y si no la hubo, para poder entablar la demanda judicial. Dicha certificacion ha de librarla el secretario del juzgado: segun la práctica general, llevaba antes el V.° B.° del juez de paz para su mayor autenticidad: hoy no creemos necesario este requisito, puesto que está declarado que es de la atribucion de los secretarios, si bien no pueden hacerlo sino en virtud de providencia del juzgado (4). Esta providencia deberá consignarse á la conclusion del acta, mandando el juez de paz que se den á los interesados las certificaciones

(1) Por Real órden de 23 de Setiembre de 1868, en aclaracion y aplicacion de las disposiciones vigentes sobre papel sellado, se dispuso que las actas de conciliacion deben estenderse en pliegos distintos del sello judicial de 4 rs., por estar prohibido estender en un pliego de papel sellado más de un instrumento público, y tener este carácter dichas actas; y no las unas á continuacion de las otras, como antes se practicaba. Con dichos pliegos, que deberán numerarse por su órden, se formará el libro que previene el art. 213 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(1) Art. 213 de la ley de Enjuic. civil.

(2) Sentencia en casacion de 5 de Abril de 1862.

(3) Arts. 42 de la ley de Enjuic. civil, y 661 á 665 de la ley provis. de organizacion judicial.

(4) Art. 481, núm. 8.° de dicha ley de organizacion judicial.

de la misma que pidieren. Estas certificaciones deben estenderse en papel del sello judicial de una peseta, si no hubo avenencia, ó no tuvo lugar el acto por la falta de comparecencia de alguna de las partes; y en el sello proporcional á la cuantía del negocio, ó en el de 8 pesetas, si este no es valuable, cuando resulte avenencia (1).

§. 3.° *Incidentes.*

En ninguna de las disposiciones vigentes sobre actos de conciliacion, lo propio que en las anteriores, se encuentra prevencion alguna, que directa ni indirectamente se refiera á los incidentes de estos procedimientos: todas dan por supuesto que el acto ha de celebrarse en la forma ordenada por la ley, sin incidente de ninguna clase, que se oponga á la celebracion y terminacion del acto. Y sin embargo, tales incidentes pueden ocurrir, y de hecho ocurren en la práctica. No son raros los casos en que se alega la escepcion de incompetencia al juez que interviene en la conciliacion: tambien puede ser recusado, lo propio que su secretario: puede oponerse asimismo la escepcion de falta de personalidad en el demandante, y la insuficiencia del poder, con que se persona el procurador de cualquiera de las partes; la de litis-pendencia; la de defecto legal en el modo de proponer la demanda ó en la citacion: pueden, en fin, promoverse otros incidentes con el objeto de impedir ó dilatar la celebracion del acto.

¿Deberá deducirse del silencio de la ley, que no son admisibles estos incidentes? ¿que no obstante cualquiera de ellos que se promueva, ha de celebrarse y terminarse el acto de conciliacion, sin resolucion prévia sobre el incidente? Se dice en apoyo de la solucion afirmativa, que la parte que promueve el incidente, por este solo hecho manifiesta su voluntad ó propósito de no querer avenirse, y no pudiendo conseguirse la conciliacion, que es el objeto principal del acto, debe en justicia darse este por terminado, para evitar al demandante los perjuicios de nuevas dilaciones. Reconocemos la fuerza y equidad de este razonamiento para todos los casos en que el incidente no tenga notoriamente otro objeto que la dilacion, revelando el que lo promueva su propósito de no avenirse; pero los hay de tal índole que afectan á la validez del acto, como sucede en el caso de incompetencia, puesto que la ley previene que la conciliacion ha de intentarse ante el *juez competente*, y en los de falta de personalidad ó insuficiencia del poder, que pueda dar lugar á la nulidad de la avenencia. ¿A qué conduciria la celebracion de un acto, cuya nulidad era notoria *á priori*? Por estas consideraciones en la práctica se admitian tales incidentes, que, á falta de avenencia de las partes sobre ellos, resolvia el juez de paz, con apelacion al de primera instancia respectivo, como su superior gerárquico.

Pero las dudas, á que daba ocasion el silencio de la legislacion anterior, han sido resueltas, á nuestro juicio, en el sentido antes indicado por la nueva ley provisional de organizacion judicial de 15 de Setiembre de 1870, modificando la práctica que regia sobre el particular; espresamente sobre unos puntos, é implícitamente sobre los demás. Ya hemos dicho, en el §. 3.° de la seccion IV, que el art. 301 de dicha ley dispone terminantemente, que «promoviéndose cuestion de *competencia* ó de *recusacion* del juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y con certificacion en que conste, podrá el actor entablar la demanda ó querella que corresponda.» El precepto no puede ser mas terminante: basta que se promueva cuestion de competencia ó de recusacion; basta que se ponga en duda la competencia ó la imparcialidad del juez de paz, promoviendo incidente sobre ello, para que se tenga por intentada sin efecto la conciliacion, y se dé por terminado el acto, sin permitirse discusion ni resolucion sobre estos incidentes. La ley tiene, para ello, que dar por supuesto que el demandado, que promueve cualquiera

(1) Arts. 7, 9 y 28 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, y demás disposiciones sobre papel sellado.

de esas cuestiones, no quiere avenencia de ninguna clase, y en tal supuesto declara que se tenga por intentada la conciliacion, y habilitado el actor para entablar su demanda.

Nos parece inconveniente esta disposicion por varios motivos. Muchas veces no será exacto ese supuesto. No puede desconocerse la influencia que el juez ejerce en el resultado de la conciliacion; y podrá creer el demandado, que interviniendo en la contienda su propio juez, ó un juez de cuya imparcialidad no tenga motivos para dudar, podrá terminarse el litigio por medio de una avenencia mas arreglada á justicia ó equidad: de suerte que su intencion no será oponerse á toda transaccion; sino, por el contrario, hacerla mas practicable con la intervencion de un mediador mas prudente ó menos apasionado. Por otra parte: ¿con qué razon se le priva de su derecho de ser demandado ante su propio juez, cuando la ley exige que se intente la conciliacion ante el *juez competente*, determinando á la vez quien lo sea? ¿Cómo ponerle en la alternativa de renunciar á las ventajas de la conciliacion, ó de someterse á un juez recusable, á quien la misma ley priva del conocimiento del negocio? Además, esto equivale á dejar el medio de la conciliacion á voluntad del demandante, puesto que con promoverla ante un juez incompetente ó recusable, se tiene por bien intentado el acto, haciendo á la vez ineficaces é inútiles las reglas de competencia establecidas en la misma ley. Para reducir así la conciliacion á una mera fórmula, valiera mas haberla suprimido, como hemos dicho anteriormente con otro motivo análogo. Si se cree ineficaz el remedio, suprímase de una vez ese trámite embarazoso y dilatorio; pero si se le tiene por eficaz, como lo es realmente, segun los datos estadísticos antes mencionados, póngasele en condiciones practicables para que no pueda eludirlo el actor cuando le acomode.

Veamos ahora á qué cuestiones de competencia se refiere el artículo de que tratamos. Dice en general, que *promoviéndose cuestion de competencia*, se tendrá por intentada la comparecencia, y es sabido que dichas cuestiones pueden promoverse por *inhibitoria* ó por *declinatoria*. Aunque ambos medios están comprendidos en aquella generalidad, parece ha querido limitarse á la declinatoria, puesto que se refiere concretamente al juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacion, y que al hablar de las cuestiones de competencia por inhibitoria entre jueces municipales, no escluye las que se promuevan sobre el conocimiento de estos actos. Así parece haberlo entendido tambien el Tribunal Supremo al decidir, por auto de 5 de Diciembre de 1870, la competencia, de que ya hemos hecho mérito, entre el juez municipal de Competa y el de Belmez, sobre el conocimiento de un acto de conciliacion. Fué promovida á instancia del demandado, acudiendo al juez que estimó competente para que requiriese de inhibicion al que le habia mandado citar: se hizo aplicacion de dicha ley de organizacion judicial, y si el Tribunal Supremo hubiese estimado que segun el artículo 301 no procedia tal cuestion, hubiera declarado no haber lugar á decidirla, en vez de hacerlo, como la decidió, á favor del juez del domicilio. De consiguiente, se tendrá por intentada la conciliacion sin ulterior progreso, cuando en el acto mismo de la comparecencia haga uso el demandado de la declinatoria, escepcionando la incompetencia del juez; pero no está privado de promover la cuestion por medio de la inhibitoria, en cuyo caso deberá celebrarse despues el acto de conciliacion ante el juez á cuyo favor se decida la competencia por el superior comun. Téngase presente que estas cuestiones no pueden promoverse de oficio, como hemos espuesto en el §. 3.° de la seccion IV.

En cuanto á la *recusacion del juez*, debemos recordar que, segun el art. 429 de la citada ley de organizacion judicial, los jueces en quienes concurra algun motivo de recusacion, deben inhibirse del conocimiento del negocio sin esperar á que se les recuse; y lo propio deben hacer, luego que sean recusados, si estiman justa la causa, conforme al artículo 436 de la misma ley y al 126 de la de Enjuiciamiento civil, sin que se dé recurso alguno contra estas providencias. (V. RECUSACION.) En tales casos, como no hay cues-

tion entre las partes, requisito que exije el citado art. 301, no puede tenerse por intentada la comparecencia; sino que deberá el actor provocar de nuevo la conciliacion ante el juez correspondiente. Solo en el caso de promoverse *cuestion*, que es lo que dice la ley, se tendrá por intentado el acto, sin ulterior progreso.

Y de esta disposicion legal sobre puntos tan capitales, como la competencia y recusacion del juez, se deduce que la intencion del legislador ha sido, que se siga el mismo sistema en los demás incidentes que puedan ocurrir. Lo persuade tambien la circunstancia de que, al determinar la propia ley de organizacion judicial, con la minuciosidad que en ella se nota, las atribuciones respectivas de los jueces y tribunales, no confiere á los de partido, que es á los que debia corresponder, el conocimiento en segunda instancia de las providencias dictadas por los jueces municipales en los actos de conciliacion, limitándose solo á las de los juicios verbales; lo cual denota que la ley supone que no deben promoverse tales incidentes. Y si á pesar de esto se promueven, y no hay sobre ellos un acuerdo entre las partes, al que serán exhortadas por los hombres buenos y el juez de paz, este dará por terminado el acto por falta de avenencia, mandando librar certificacion á la parte que la pida para que pueda entablar la correspondiente demanda. Si hubiere acuerdo, se hará aquello en que convengan los interesados. Si estos convienen en que no es bastante el poder presentado, por ejemplo, y en suspender el acto hasta que se subsane la falta, así deberá practicarse.

Los vicios de que adolezca el acto de conciliacion, podrán reclamarse despues en el juicio correspondiente. Si hubo avenencia á pesar de carecer de personalidad ó de poder bastante una de las partes, ó adolece el acto de otro vicio que lo invalide, podrá entablarse la demanda de nulidad, conforme al artículo 217 de la ley de Enjuiciamiento civil, de que hablaremos en el §. 2.° de la seccion siguiente. Y si no hubo avenencia, podrá en su caso utilizar el demandado la escepcion dilatoria de efecto legal en el modo de proponer la demanda, para que tenga lugar el requisito prévio de la conciliacion, si el acto celebrado fuese nulo por cualquier motivo: ó haciéndolo así, se entenderá que no quiere ó no cree posible la avenencia. Muy rara vez será de utilidad este recurso, innecesario por otra parte para la validez del juicio, así como en el primer caso podrá utilizarse con provecho.

Solo un incidente podrá promoverse hoy en los actos de conciliacion, que exige resolucion del juez; el de recusacion del secretario del juzgado, toda vez que al tratar de ella la misma ley de organizacion judicial en sus arts. 557 y siguientes, no hace escepcion de dichos actos. Pero como este incidente ha de resolverse en pieza separada, sin suspenderse el curso del asunto principal, entendiendo mientras tanto en él el suplente, no producirá otro efecto que determinar si el recusante ha de pagar ó no los derechos del recusado. Por esto lo mas conveniente será, en tales casos, hasta para el mismo secretario recusado, que éste se abstenga de intervenir en el asunto, como puede hacerlo, sustituyéndole el suplente, sin necesidad de formar la pieza de recusacion, en la cual pudiera ser condenado en costas, como tendria que serlo con arreglo á la ley si fuese admitida la recusacion. Véase su artículo.

Indicarémos por último, que en el dia no pueden hacer uso los jueces de paz de la facultad que les concedió el art. 27 del reglamento provisional para proveer provisionalmente, como incidente del juicio de conciliacion, y sin perjuicio de celebrarlo á la brevedad posible, sobre la retencion de efectos de un deudor que intente sustraerlos, ó sobre algun otro punto de igual urgencia. La ley de Enjuiciamiento civil ha previsto todos estos casos, determinando el procedimiento que ha de seguirse, como se verá en sus artículos respectivos, y á él es preciso acomodarse, sin que puedan suscitarse como incidentes del acto de conciliacion, del que están además esceptuados, tanto los embargos preventivos, como los demás asuntos urgentes á que aquella disposicion se refiere.

SECCION VI.

DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION.

Para determinar los efectos de la conciliacion, es preciso atender al resultado del acto. Si en él se ha conseguido el objeto y fin á que se dirige, que es la terminacion del litigio por avenencia de los interesados, producirá unos efectos; y otros diferentes, cuando no haya podido lograrse dicho objeto, bien sea por falta de avenencia, ó porque no haya sido posible la celebracion del acto á causa de no haber concurrido alguna de las partes. Los examinarémos con separacion; y al hacerlo, para espresarnos con precision y laconismo, sin faltar al tecnicismo legal y práctico, daremos el nombre de *conciliacion intentada* á la comprendida en este segundo caso; y el de *conciliacion convenida*, á la que se halla en el primero, ó sea cuando el acto ha dado por resultado la avenencia de las partes.

Pero antes, como asunto comun á uno y otro caso, espondremos la jurisprudencia establecida sobre los efectos que producen las manifestaciones hechas ó contestaciones dadas por las partes en el acto de conciliacion. Tales manifestaciones no tienen la fuerza y valor de la *confesion* ó confesion judicial solemne, que por sí sola constituye prueba plena, por no concurrir en ellas los requisitos consignados en la ley 2.ª, tít. 13, Partida 3.ª, ni en los arts. 292 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil (1). Pero no puede negárseles el valor y eficacia que se dá á cualquiera otra declaracion sobre hechos, que las partes hacen en sus escritos, ó de palabra ante la autoridad judicial; y en tal concepto debe el juez apreciarlas con las demás pruebas resultantes de autos (2). Para que tengan todo el valor de la confesion judicial, será preciso que la parte que las hizo se ratifique en ellas bajo juramento á presencia del juez.

§. 1.° *Efectos de la conciliacion intentada.*

Se tiene por intentada la conciliacion siempre que el demandado es citado para ella en debida forma á peticion del demandante, del modo que hemos espuesto en el §. 1.° de la seccion anterior, y no puede conseguirse la avenencia, bien porque se nieguen á ella espresamente los interesados, ó ya porque no pueda verificarse la celebracion del acto á causa de no haber comparecido ninguna de las partes, ó alguna de ellas, en el dia y hora señalados, ni alegado motivo justo que lo impidiera. En todo caso de falta de avenencia, ya sea espresa, ya presunta, la *conciliacion intentada* produce los efectos siguientes:

1.° *Deja espedito el ejercicio de la accion en el juicio correspondiente.* Este es el principal efecto de la conciliacion intentada, como consecuencia indeclinable del principio general de que sin hacer constar que se ha intentado en vano el medio de la conciliacion, no se debe admitir demanda alguna en juicio contencioso. Considerando la conciliacion como un preliminar indispensable de todo juicio, salvas las escepciones establecidas por la ley, es consiguiente que el hecho de procurarla ó intentarla, ponga al actor en condiciones de entablar su demanda ante los tribunales de justicia para obtener la declaracion de su derecho. El cumplimiento del precepto legal que ha establecido aquel requisito prévio, abre la puerta al juicio en que se ha de ventilar la cuestion litigiosa, que no pudo terminarse pacíficamente por medios amistosos.

Y no es necesario para ello que se celebre el acto y que se haga uso en él de esos medios conciliatorios, guardando las formas que la ley tiene establecidas: basta para conseguir el efecto de que hablamos, que el actor lo intente practicando las diligencias que le

(1) Sentencias del Trib. Sup. de Just. de 7 de Febrero de 1863 (*núm.* 26 *de la Colec. leg.*), y 20 de Diciembre de 1865 (*núm.* 177 *de id.*).

(2) Considerando 3.° de la sentencia de id., de 19 de Octubre de 1868 (*núm.* 76 *de la Colec. leg.*), en el cual se declara que «si bien el acto de conciliacion no es un juicio, no puede menos de tener valor y eficacia la confesion y reconocimiento que se verifica en dicho acto.»

incumben, y que se cite al demandado de conciliacion, como ya hemos dicho. Si éste no compareciere, ni por consiguiente se verificara el acto solemne que la ley previene, se frustrará el objeto á que se aspira; pero esto no puede perjudicar al demandante, que cumple por su parte acudiendo al juez conciliador.

2.° *Interrumpe la prescripcion.* La conciliacion intentada perturba la buena fé, en que pudiera hallarse el demandado acerca de la pertenencia de la cosa objeto de la demanda; y siendo la buena fé uno de los requisitos esenciales de la prescripcion, faltando aquella, queda esta interrumpida. Segun la ley 29, tít. 29 de la Partida 3.ª, produce este efecto la demanda de la cosa, aun hecha delante de amigos, la citacion para el juicio aunque sea ineficaz, y cualquier otro acto formal que ponga en noticia del demandado la falta de derecho con que posee, pues desde entonces deja de ser quieta y pacífica su posesion, y pierde la cualidad de poseedor de buena fé, que es indispensable para ganar las cosas por tiempo. No puede negarse esta eficacia á la citacion para el acto de conciliacion, y mucho menos al acto mismo, una vez intentado. El código francés se lo atribuye espresamente; pero á condicion de que se interponga la demanda dentro del mes siguiente al dia de la no-comparecencia, ó de la celebracion del acto sin obtenerse la conciliacion. Aunque pudiera estimarse conveniente esta limitacion, no se halla consignada en nuestras leyes, y debe por tanto seguirse la regla general. Véase **PRESCRIPCION**.

3.° *Constituye en mora al deudor, para el efecto de pagar intereses no pactados.* Tambien el código de procedimiento civil de Francia atribuye este efecto á la citacion para la conciliacion, con la misma condicion antes indicada de que se interponga la demanda dentro del mes siguiente al acto de la comparecencia ó al dia en que debió celebrarse. Aunque nuestras leyes nada han dispuesto espresamente sobre este particular, está mandado que el deudor legítimamente constituido en mora, debe abonar el interés legal, aunque no esté pactado (1); y es doctrina legal, admitida como jurisprudencia por los tribunales, «que el deudor se constituye en mora cuando no entrega la cosa *en la sazon que debia*» (2). De consiguiente, si no media pacto sobre intereses, ni hay plazo para la entrega de la cosa, ó esta ha de hacerse á voluntad del acreedor, luego que éste demanda y hace citar á su deudor para la conciliacion, queda tal deudor constituido en mora y obligado por tanto al pago de los intereses legales. Véase **DEUDOR**.

4.° *¿Hará viciosa, y nula por tanto, la enajenacion posterior de la cosa, objeto de la demanda?* Empleamos la fórmula interrogativa, porque realmente es una cuestion el punto indicado. La ley 13, tít. 7 de la Partida 3.ª, suponiendo que procede maliciosamente ó con engaño el que enajena una cosa, despues de haber sido emplazado sobre ella, declara nula la enajenacion, mandando que «tal enajenamiento non vala, é que sea tornada aquella cosa en poder de aquel que la enajenó, é que sea él tenudo de facer derecho sobre ella.» De suerte que uno de los efectos, que en virtud de esta ley atribuyen todos los espositores del derecho, como doctrina inconcusa, á la citacion y emplazamiento de la demanda, es el de invalidar la enajenacion de la cosa, objeto de ella, cuando el emplazado la enajena despues del emplazamiento. ¿Producirá este mismo efecto la citacion para el acto de conciliacion? Veamos dos resoluciones, al parecer contradictorias, del Tribunal Supremo de Justicia.

La una es la sentencia de 30 de Junio de 1854, dictada en un recurso de nulidad, interpuesto por Laureano Gonzalez y Manuel Vazquez en pleito con Ildefonso Alonso y otro. En los considerandos 6.° y 7.° estableció la doctrina siguiente:

«Considerando que uno de los efectos atribuidos á la citacion por la ley 13, tít. 7.°, Partida 3.ª, es el de anular la enajenacion de la cosa, objeto de la demanda, cuando el

(1) Art. 8.° de la ley de 14 de Marzo de 1856.
(2) Sent. del Trib. Sup. de Just. de 7 de Abril de 1866, en recurso de casacion entre Doña Cristina de Paz y D. Manuel San Martin.

emplazado la enajena despues del emplazamiento:

»Considerando que aunque se prescinda de la anterioridad de la demanda de los compradores á la permuta hecha con Prieto, *no puede*, segun reglas de buena interpretacion, *negarse hoy al juicio de conciliacion*, seguido de la demanda tan prontamente como lo fué en el presente caso (se interpuso once dias despues), *el efecto que la ley de Partida atribuyó á la citacion*, cuando aquel juicio era desconocido.»

La otra sentencia fué dictada en 14 de Enero de 1869, en un recurso de casacion interpuesto por D. Federico Nicolau en pleito con Doña María Tortrás. Se trataba de la reivindicacion de unos terrenos, que habia vendido el demandado catorce meses despues del acto de conciliacion, y cuatro meses y medio antes de que se entablase la demanda. Aquel escepcionó que esta debia dirigirse contra el comprador, á lo cual opuso la parte demandante la calidad litigiosa de la cosa por haber sido vendida despues de la conciliacion. Por la ejecutoria se desestimó dicha escepcion, y fué condenado el demandado á la entrega de los terrenos; pero el Tribunal Supremo la casó y anuló, dando lugar al recurso, entre otros, por los fundamentos siguientes:

«Considerando que *á la citacion para el acto de conciliacion no puede darse hoy los efectos que al emplazamiento*, para contestar una demanda, atribuye la espresada ley 13, tit. 7.°, Partida 3.ª, ya porque, segun la de Enjuiciamiento civil, dicho acto no tiene el carácter, ni aun el nombre de juicio, y ya tambien porque el art. 42 de la ley Hipotecaria permite la anotacion preventiva de las demandas de propiedad, y no la de los actos de conciliacion, como lo haria si por estos adquiriese la cosa el carácter de inalienabilidad que la da la interposicion de la demanda reivindicatoria:

»Considerando, por tanto, que la sentencia que declara nula la venta de la finca hecha á favor de D. José Casanovas por D. Federico Nicolau en el concepto de ser litigiosa, y le condena á su restitucion, infringe la leyes citadas.»

Resulta, pues, que la primera de dichas sentencias atribuyó á la citacion para la conciliacion los mismos efectos que la ley de Partida concedió al emplazamiento, respecto del punto de que tratamos; y la segunda le ha negado dichos efectos. Se fundó la primera en que, cuando se dictó la ley de Partida, era desconocido el juicio de conciliacion, por cuya razon no pudo comprenderlo en su letra, pero sí lo estaba en su espíritu; y la segunda en que, segun la ley de Enjuiciamiento, dicho acto no tiene el carácter, ni aun el nombre de juicio. Basta fijarse en las fechas para comprender que en el primer caso se trataba de un *juicio de conciliacion*, celebrado conforme al reglamento provisional y á la ley de 3 de Junio de 1821, y en el segundo de un *acto de conciliacion*, celebrado conforme á la ley de Enjuiciamiento civil. ¿Es que la variacion de nombre y las novedades por esta ley introducidas, son de tal índole que han alterado la esencia de ese acto, y por consiguiente tambien sus efectos, hasta el punto de haberse creido el Tribunal Supremo obligado á modificar radicalmente su anterior jurisprudencia? Así parece deducirse de los fundamentos de la última sentencia antes citada.

Respetando, como se merece, esta autorizada opinion, nos parece que no es motivo bastante el indicado para variacion tan radical y absoluta. Ya hemos demostrado que la ley de Enjuiciamiento civil no ha modificado la esencia de la conciliacion, y creemos que no obstan las novedades por esta introducidas para que siga estimándose la conciliacion como comprendida en el espíritu de la ley de Partida. La razon capital de esta consiste en suponer *de derecho* el dolo cuando se hace la enajenacion despues del emplazamiento, y por consiguiente cuando el poseedor de la cosa tiene ya aviso oficial de que es demandado sobre ella. ¿Y no se le dá tambien este aviso con la citacion para la conciliacion? ¿Puede suponerse buena fé en el que enajena la cosa despues de esta citacion y del acto conciliatorio, sin haberse obtenido la avenencia? Existe, pues, en este caso, lo propio que en el del emplazamiento, la razon de

la ley de Partida, para suponer *de derecho* el dolo, salva la prueba en contrario, y debieran por tanto atribuirse iguales efectos á una y otra citacion.

La sentencia citada de 14 de Enero de 1869 se funda tambien en que el art. 42 de la ley Hipotecaria, al permitir la anotacion preventiva de las demandas de propiedad, no autoriza la de los actos de conciliacion, como lo haria si por estos adquiriese la cosa el carácter de inalienabilidad que le dá la interposicion de la demanda reivindicatoria. Aun concediendo que sea incontestable esta razon, no se opone á la opinion que sostenemos. La ley Hipotecaria ha establecido las garantías que ha creido convenientes para asegurar los derechos del tercero que adquiere de buena fé una cosa inmueble, y estos derechos tienen que ser respetados; mas no por eso se eximirá de responsabilidad el que ha procedido de mala fé, porque la ley nunca protege el dolo. Puede suceder que el demandante no pida la anotacion preventiva de su demanda reivindicatoria: ¿será aplicable en tal caso la ley de Partida al demandado que enajene la cosa despues del emplazamiento, salvos los derechos legítimamente adquiridos por un tercero? Si se contesta afirmativamente, como procede á no suponerse derogada dicha ley, diremos que la misma razon hay para que se aplique, con igual salvedad, al que la enajena despues del acto de conciliacion, sobre todo, si ha sido seguido de la demanda como en el caso de la primera sentencia. El trascurso de un plazo, que debiera fijar la ley, el de un mes por ejemplo, sin haber interpuesto la demanda, seria suficiente para presumir que el actor habia desistido de su pretension, y para negar por tanto al acto de conciliacion la eficacia de que tratamos.

En todo caso la cuestion es de tribunales, á los cuales corresponde apreciar si el que enajena la cosa despues de haber sido citado á conciliacion ha procedido ó no con dolo: si lo hubo, la enajenacion será viciosa y deberá rescindirse, sin perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero, lo propio que cuando se hace antes del emplazamiento de la demanda. Prevaleciendo la jurisprudencia, últimamente sentada por el Tribunal Supremo, corresponderá al actor la prueba del dolo, en vez de suponerlo *de derecho*, salva siempre la prueba en contrario, como sucederia si la citacion para la conciliacion produjese sobre este punto los mismos efectos que el emplazamiento. Consiste, pues, únicamente la diferencia en la prueba del dolo, que la ley lo supone en un caso, y en el otro debe probarlo el actor. Puede consultarse lo que hemos espuesto sobre esta materia al tratar *de la cesion de derechos litigiosos*, en la seccion V del artículo **CESION DE ACCIONES**, página 589 del tomo VIII.

§. 2.° *Efectos de la conciliacion convenida, y recursos para invalidarla.*

En todos los casos de conciliacion convenida, esto es, siempre que en el acto de conciliacion se consigue la avenencia de las partes, resulta un pacto, transaccion ó convenio, consignado en un documento auténtico. Esta indicacion basta para comprender los dos efectos importantes que produce dicho acto de conciliacion convenida, á saber:

1.° Que las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo convenido, como al de cualquiera otra obligacion lícita, contraida legalmente.

2.° Que debe exigirse ejecutivamente dicho cumplimiento por la via breve y sumaria que espondremos en la seccion siguiente, en virtud de la solemnidad y fuerza que la intervencion de la autoridad judicial da al documento en que se halla consignado tal convenio.

Y decimos que *debe* exigirse ejecutivamente, porque no puede serlo sino por los trámites breves y sumarios establecidos por la ley de Enjuiciamiento civil. Si se formulase una demanda ordinaria sobre asunto convenido ya en acto de conciliacion, y admitida, se decidiese el mismo punto en la sentencia, procederá la casacion de esta, como ya lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia, por infraccion del art. 218 de dicha ley, que somete la ejecucion de lo convenido al juez de paz ó al de primera instancia, segun la

cuantía ó importancia de lo reclamado, dándole el carácter y eficacia de cosa juzgada, lo cual impide un nuevo juicio sobre el mismo asunto. Y no basta para promover un litigio, separándose de esta regla, la indecision de algun punto incidental, que pueda resolverse al ejecutar lo pactado en la conciliacion, como la falta de nombramiento de perito tercero para el caso de discordia, pues tales incidentes son parte de la ejecucion de lo convenido, y deben resolverse por el juez que de ella conoce (1).

Del primero de dichos efectos es una consecuencia necesaria lo que dispone el art. 217 de la ley de Enjuiciamiento civil. Ordénase en él que contra lo convenido en el acto de conciliacion sólo se admitirá la demanda de nulidad, y que esta procederá únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos. Por la legislacion anterior á dicha ley estaba prevenido (2), que lo convenido en el juicio de conciliacion debia ejecutarse *sin escusa ni tergiversacion alguna* por el mismo alcalde como juez de paz, y no se concedia recurso alguno contra tal convenio. La esperiencia habia demostrado que esta regla, establecida con el laudable fin de evitar nuevas contiendas, era insostenible, porque en algun caso daba lugar á que se sancionara una notoria injusticia, y por esto se reformó en la nueva ley de Enjuiciamiento. Para justificar esta reforma, la Comision de codificacion que la propuso, en la esposicion de motivos de dicha ley, dijo lo siguiente:

«El principio absoluto que viene rigiendo de que no haya recurso contra lo que del acto de conciliacion resulte, es absurdo, es insostenible. La conciliacion, en último resultado, es solo un pacto, una transaccion, y en este concepto está sujeta á todas las condiciones que las leyes establecen para la fuerza de las obligaciones. Si la transaccion es nula por falta de capacidad legal en la persona que la otorga, si ha sido arrancada con violencia, ó efecto de una sorpresa preparada por artificio, ó si tiene cualquiera de los otros defectos que suponen falta de voluntad en el que se obliga, ¿es justo, es moral que sea irrevocable lo que un demandante astuto, prevaliéndose tal vez de la parcialidad, de la ignorancia, ó de la falta de entereza de un juez de paz, haya preparado en daño de su contrario? ¿No debe proceder en estos casos la demanda de nulidad, igualmente que procederia contra una escritura de transaccion?»

Estas razones justifican cumplidamente la reforma antes indicada. Segun ella, puede reclamarse la nulidad de lo convenido en acto de conciliacion por las mismas causas que dan lugar á la nulidad de los contratos. Para la validez de estos se exijen por las leyes ciertos requisitos esenciales, cuales son: consentimiento libre y espontáneo; capacidad de los contrayentes; cosa cierta, posible y permitida; y causa lícita de la obligacion. La falta de cualquiera de estos requisitos producirá la nulidad é ineficacia del convenio, como la producen tambien otras causas. El método de la ENCICLOPEDIA exije que nos limitemos á estas indicaciones: la esposicion de dichos requisitos y de las demás causas de nulidad, pueden verse en sus artículos respectivos, y especialmente en los de **CONTRATO** y **OBLIGACION**.

Nótese que el citado art. 217 de la ley de Enjuiciamiento civil habla solo de la demanda de nulidad *contra lo convenido* en el acto de conciliacion; no *contra el acto* mismo; y es sin duda porque la ley parte del supuesto que el acto se habrá celebrado con todos los requisitos legales. Pero puede suceder que adolezca de vicios insubsanables, que produzcan su nulidad: puede suceder que haya faltado la presencia del juez de paz, ó la intervencion del secretario: puede tambien suceder que se haya cometido en él alguna falsedad. En el primer caso falta al documento la solemnidad necesaria para que sea auténtico y ejecutivo: en el segundo no puede producir otro efecto que el de un procedimiento criminal contra quien corresponda. En tales casos, no dentro de los ocho dias que fija la ley para

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en casacion, de 10 de Noviembre de 1860 (*número* 237 *de la Colec. leg*).

(2) Artículos 8.° de la ley de 3 de Junio de 1821, restablecida en 1837, y 34 del Reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835.

la demanda de nulidad contra lo convenido; sino en cualquier tiempo en que se pida la ejecucion, podrá el demandado oponer la escepcion de nulidad ó falsedad del documento, lo propio que podria hacerlo contra una escritura pública. No así cuando los vicios sean subsanables, como, por ejemplo, si la citacion no se hizo con las formalidades debidas, ó si el juez era incompetente: la comparecencia de la parte en el primer caso, y la sumision en el segundo, subsanaron dichos vicios, sin que puedan afectar á la esencia y validez del convenio, y no podrá por tanto fundarse en ellos la demanda de nulidad. Pudo la parte interesada negarse á toda avenencia por dichos motivos, como por cualquiera otro; pero si se prestó al convenio, con este hecho sancionó y dió por válido el acto, y ya no puede reclamar contra él.

Supuesta la validez y eficacia del acto de conciliacion, solo puede impedirse la ejecucion de lo en él convenido por medio de la demanda de nulidad, de que habla el citado artículo 217, fundada en alguna de las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos, como hemos dicho. Esta demanda, para que sea admisible, ha de interponerse ante el juez de primera instancia del partido, á que corresponda el juzgado de paz, dentro de los ocho dias siguientes á la celebracion del acto, con esclusion de los inhábiles, y ha de sustanciarse por los trámites del juicio ordinario. Así lo ordena dicho artículo. Aunque la denominacion de *juicio ordinario* se aplica generalmente al de mayor cuantía, como tambien lo es el de menor cuantía, creemos que deberá sustanciarse por los trámites de éste dicha demanda cuando no esceda de 3,000 reales la cuantía de lo demandado en el acto de conciliacion: de otro modo se faltaria al precepto terminante del art. 1133 de la propia ley. Y no será necesario intentar nuevo acto de conciliacion, pues aunque la ley no lo dice espresamente, se deduce del corto término que se concede para entablarlo, lo cual coloca á estas demandas en la clase de urgentes y perentorias.

Réstanos examinar un punto dudoso, de bastante trascendencia. Ya hemos visto que la ley concede el término de ocho dias para interponer la demanda de nulidad contra lo convenido en el acto de conciliacion; que no se permite otro recurso, y que procederá únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos. ¿Debe deducirse de esta disposicion de la ley de Enjuiciamiento, que trascurridos los ocho dias es improcedente todo recurso contra tales convenios? Creemos que cualquiera reclamacion entablada fuera de ese término será ineficaz para impedir la *ejecucion* de lo convenido, que es de lo que trata dicha ley, pues otra cosa no seria de su competencia; pero que no priva á las partes del derecho de utilizar despues en la via ordinaria los recursos que las leyes conceden contra los mismos contratos y transacciones, como sucede en el juicio ejecutivo. Es verdad que el art. 217 antes citado no dice «contra la *ejecucion* de lo convenido,» sino solamente *contra lo convenido*; pero debe, en nuestro concepto, sobreentenderse aquella palabra, porque de lo que realmente se trata, y no podia tratarse de otra cosa en una ley de procedimientos, es de dar reglas para llevar á efecto lo convenido en acto de conciliacion.

Supongamos que en el convenio hubo lesion enormísima; que el representante de un menor comprometió los intereses de éste, causándole grave perjuicio; que se transige sobre una herencia, ó se accede á la entrega de la misma ó de una cosa legada, en vista de un testamento, que despues resultó falso ó derogado; que el procurador transige con perjuicio de su mandante, sin poder bastante para ello; que se ocultan dolosamente los vicios de la cosa cedida, etc., etc. Por que esto se hizo en acto de conciliacion, ¿no ha de poder el menor utilizar el beneficio de restitucion *in integrum* dentro del cuadrienio legal; no ha de poder la parte perjudicada hacer uso dentro del término correspondiente de la accion que concede el derecho civil para pedir la rescision ó nulidad de tales convenciones? Esto seria dar á la conciliacion convenida una fuerza y eficacia que la ley no concede á ese mismo convenio, celebrado en escritura pública, cuando el propósito ha

sido igualarlos en sus efectos: eso seria dar á la conciliacion mayor valor y fuerza que á la cosa juzgada, á la vez que se la ha despojado del carácter de juicio.

Por estas consideraciones creemos que el artículo 217 de la ley de Enjuiciamiento civil debe entenderse en el sentido de que no puede impedirse *la ejecucion de lo convenido* en acto de conciliacion sino por medio de la demanda de nulidad, de que habla dicho artículo, presentada dentro de los ocho dias que el mismo prescribe; pero no obsta para que, sin perjuicio de dicha ejecucion, y despues de ella, puedan utilizarse en vía ordinaria las acciones que conceden las leyes para pedir la rescision ó nulidad de tales convenios por vicios ó motivos que los invaliden. Esto es, en nuestra opinion, lo justo y procedente conforme á los buenos principios: lo contrario seria inconveniente y peligroso, y daria á los convenios celebrados en acto de conciliacion un privilegio y un valor no conforme á su naturaleza. Justo es que tengan fuerza ejecutiva, como lo exigen las solemnidades de sus formas; pero así como en el juicio ejecutivo procede despues la vía ordinaria, justo es tambien que se conceda ésta en el procedimiento de que tratamos, para poder reparar con el debido conocimiento de causa los agravios, fraudes é ilegalidades que puedan haberse cometido en aquellos.

Debemos manifestar, sin embargo, que no está de acuerdo con esta doctrina algun fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Entablada una demanda de nulidad, ó rescision por lesion enormísima, de una transaccion celebrada en acto de conciliacion, la Audiencia sentenciadora, revocando la sentencia del juez de primera instancia, desestimó la demanda por haber sido propuesta despues de trascurridos los ocho dias que previene el citado artículo 217. Interpuesto recurso de casacion, fundado en que habian sido infringidas las leyes 2.ª y 3.ª, tit. 1.°, libro 10 de la Novísima Recopilacion, que establecen la rescision de los contratos cuando media lesion en mas de la mitad del justo precio, y conceden el término de cuatro años para reclamarla, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso, en consideracion á que, habiéndose sujetado la Sala sentenciadora á lo que prescribe aquel artículo, no habia infringido dichas leyes (1).

Pero en otro pleito se declaró rescindido un contrato celebrado en acto de conciliacion, no obstante que el demandado invocó á su favor el precepto del citado art. 217, y que la demanda se habia interpuesto mucho despues del plazo por este señalado (2). El Tribunal Supremo, para declarar en este caso que no habia lugar al recurso, se fundó en que dicho artículo no prohibe el ejercicio de las acciones que por otro concepto que no sea el de nulidad puedan ejercitarse, y que no se propuso la demanda ni se dictó la sentencia contra lo convenido en el acto de conciliacion. Nótese que se pidió y acordó la rescision del convenio por una de las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos, cual fué el no haber cumplido el demandado la obligacion que contrajo por su parte; y si se estima que esto no es *contra lo convenido*, habrá de con-

(1) Sentencia del Trib Supremo, en casacion, de 12 de Mayo de 1865 (*núm. 194 de la Coleccion legislativa*).

(2) Sentencia de id. de 4 de Enero de 1866 (*núm. 1.° de la Colec. leg.*). Los tres primeros considerandos dicen así:

«Considerando que al prescribir la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 217 que contra lo convenido en los actos de conciliacion solo se admita la demanda de nulidad dentro del término que prefija, *no ha prohibido que puedan ejercitarse las acciones que por otro concepto procedan legalmente*:

Considerando que Doña Laura Yedra, fundando la que dedujo en estos autos, en que por no haber cumplido el demandado la obligacion que se impuso de gestionar para la rehabilitacion de su crédito segun lo convenido, tampoco podia exigírsele que diera lo ofrecido por su parte, siendo mútuos y correlativos los deberes; y pidiendo en su consecuencia la rescision del contrato celebrado, ejercitó la accion que legalmente nace del innominado *do ut facias*:

Considerando que formulada en estos términos la demanda y apreciada de tal manera la cuestion y el resultado de los actos de conciliacion por la Sala juzgadora, segun el mérito y valor de las pruebas practicadas en su razon y para su esclarecimiento, aparece, que ni la demanda se propuso, ni la sentencia se ha dictado contra lo convenido en dichos actos, siendo por lo tanto inaplicable al caso presente la disposicion contenida en el espresado art. 217 de la ley de Enjuiciamiento, cuya infraccion se invoca en el primer motivo del recurso.....»

cederse al menos que con la rescision queda sin efecto el convenio.

La doctrina de dicha sentencia viene realmente á confirmar la que hemos sentado anteriormente, de que despues del plazo de ocho dias, que fija el citado artículo 217, pueden utilizarse en via ordinaria contra lo convenido en acto de conciliacion, no para impedir su ejecucion; sino para rescindirlo é invalidarlo, las acciones que á este fin concedan las leyes respecto del mismo convenio en general. Este fué en su esencia el caso de ese pleito.

SECCION VII.

EJECUCION DE LO CONVENIDO EN ACTO DE CONCILIACION.

El objeto y fin de la conciliacion y la solemnidad del documento en que se consigna, exigen que el convenio en ella celebrado se lleve á efecto ejecutivamente, por la via mas breve y sumaria que sea posible, cuando la parte obligada no lo cumpla espontáneamente. La ley de 3 de Junio de 1821 y el reglamento provisional de 1835 ordenaron sobre este punto, como ya hemos dicho, que lo que quedare resuelto y convenido entre las partes en el juicio de conciliacion, debia llevarse á efecto *sin escusa ni tergiversacion alguna* por el mismo alcalde, que de él habia conocido. No se dictaron reglas para ello, y estaban por tanto sujetos estos procedimientos al criterio de cada alcalde, que empleaba los medios que le parecian mas adecuados para que tuviera efecto el convenio celebrado entre las partes, tal como lo habian convenido.

La esperiencia hizo conocer los graves inconvenientes de este sistema, que sometia al arbitrario criterio de jueces legos, faltos de toda instruccion las mas veces, la resolucion de cuestiones importantes, tanto sobre el hecho como sobre el derecho. Para corregir este mal, se dictó el art. 104 del reglamento de los juzgados de primera instancia de 1.° de Mayo de 1844, por el que se previno, que cuando los alcaldes y sus tenientes, como jueces de paz, llevasen á efecto las providencias conciliatorias, con que las partes se hubiesen aquietado, remitiesen las diligencias para su continuacion á los respectivos juzgados de primera instancia, tan pronto como se suscitara tercería ú otra cuestion ajena de la convenida en el juicio de paz, ó fuese necesario conocimiento del derecho para su ejecucion. Pero esta disposicion dió por resultado el establecimiento de una práctica diametralmente opuesta á la seguida hasta entonces: apenas habia asunto de esta clase que no se pasara al juzgado de primera instancia, cualquiera que fuese su cuantía, á pretesto de que era necesario conocimiento del derecho, unas veces á instancia de parte, y las mas de oficio, para librarse el juez de paz de responsabilidad y trabajo.

La ley de Enjuiciamiento civil atendió á la necesidad, que se tocaba en la práctica, de poner remedio á estos males, y á ese fin se dirijen las disposiciones de los arts. 218, 219 y 220. En ellos se determina el juez, á quien corresponde llevar á efecto lo convenido en acto de conciliacion, los procedimientos que á este fin han de emplearse, y los recursos que pueden utilizarse contra las providencias dictadas en dichos procedimientos.

Segun el art. 218, corresponde al juez de paz llevar á efecto lo convenido en el acto de conciliacion ante él celebrado, cuando no esceda de la cantidad prefijada para los juicios verbales; y si escediere de esta cantidad, al juez de primera instancia del partido á que corresponda el mismo juzgado de paz. Para determinar, pues, la competencia hay que atender á la cuantía del negocio, no de todo lo que se demandó en el acto de conciliacion; sino de lo convenido, pues esto es lo que ha de llevarse á efecto. Si lo convenido es valuable, y su valor no escedia de 600 reales conforme al art. 1162 de la propia ley, y hoy de 250 pesetas, que es la cuantía de que ahora conocen en primera instancia y en juicio verbal los jueces municipales, segun el artículo 270 de la nueva ley de organizacion judicial, corresponderá la ejecucion al mismo juez de paz ó municipal; y en cualquiera otro caso, al de primera instancia ó tribunal del partido. Se sigue, como era conveniente,

el principio de que cada juez ejecute aquello mismo, de que podria conocer en primera instancia de la via ordinaria.

Como la competencia del juez se determina por la cuantía del negocio, preciso será fijar esta préviamente, cuando haya duda ó cuestion sobre ello. Esto deberá ser objeto de un incidente, que habrá de promoverse ante el juez que haya tomado conocimiento del asunto, con apelacion para ante su superior inmediato, conforme al art. 220. No podrá suscitarse, como cuestion de competencia, aunque lo es realmente, en razon á que tales cuestiones no pueden promoverse entre un juez inferior y el superior, á quien está subordinado, segun se dijo en su lugar correspondiente (*pág.* 316 *del tomo XI*): por esto creemos más procedente y espedito el medio antes indicado, utilizando la declinatoria.

Atendida la índole de estos procedimientos, y teniendo en consideracion la circunstancia de no exigirse la cualidad de letrado para ser juez de paz ó municipal, y que la cuantía determina la competencia, se ha establecido una escepcion á la regla general de que el juez competente, para conocer de lo principal, lo es tambien para todos sus incidentes. Segun el art. 219, «en los casos en que corresponda al juez de paz la ejecucion de lo convenido, éste suspenderá las actuaciones, y las remitirá al juez de primera instancia, siempre que por un tercero se suscite alguna cuestion de derecho.» Nótese que la cuestion ha de ser de *derecho* y suscitada por *un tercero*: si se promoviera por el demandante ó por el demandado, deberá conocer de ella el mismo juez de paz con apelacion al del partido. Y aun para no faltar á los principios establecidos por la misma ley, creemos que las tercerías que no escedan de la cuantía de los juicios verbales, deberán decidirse por el juez de paz, no obstante el precepto absoluto de dicho artículo, que no ha podido derogar las demás reglas de competencia.

En los casos antes indicados, el tercero deberá deducir su pretension ante el juez de paz, el cual mandará que, con suspension de los procedimientos para la ejecucion de lo convenido, se remitan las actuaciones originales al juez de primera instancia del partido, con citacion y emplazamiento de las partes para que acudan ante él á usar de su derecho. Este juez sustanciará y decidirá la tercería por los trámites ordinarios: si se desestima, deberán devolverse las actuaciones al juez de paz para que termine la ejecucion de lo convenido; y si se dá lugar á ella, corresponderá la ejecucion de esta sentencia al juez de primera instancia que la dictó. Esto es lo que creemos procedente, segun los principios generales por que se rije esta materia.

En cuanto á los procedimientos para la ejecucion de lo convenido en el acto de conciliacion, el art. 218, antes citado, dispone que se llevará á efecto «de la manera y en la forma prevenidas para la ejecucion de las sentencias.» Se dá, por tanto, á estos convenios, para dicho efecto, el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de la demanda de nulidad, de que hemos hablado en el §. 2.° de la seccion anterior, única oposicion admisible contra la ejecucion de los mismos. En su lugar correspondiente espondremos dichos procedimientos, los cuales han de sujetarse á lo que se ordena en el título 18 de la ley de Enjuiciamiento civil para cada uno de los casos que pueden ocurrir. Véase **EJECUCION DE SENTENCIA** (*en lo civil*). Téngase presente además, como regla especial para los mismos, que segun el art. 220, de las providencias que en ellos dicte el juez de paz, podrá apelarse al de primera instancia, sin ulterior recurso; y de las que éste dicte en los negocios de su competencia, ó sea en los que le corresponde la ejecucion de lo convenido, á la Audiencia del territorio, tambien sin ulterior recurso (1). En uno y otro caso ha de interponerse la apelacion dentro de tercero dia.

La parte á quien interese pedir la ejecucion de lo convenido, deberá obtener préviamente la certificacion del acto de conciliacion, que es la base de estos procedimientos, y con ella acudirá al juzgado correspondiente. Si compete al de primera instancia, hará la solicitud por escrito, y con firma de letrado y de pro-

(1) Sentencia del Trib. Sup. de Just., en apelacion, de 31 de Enero de 1863.

curador cuando el asunto sea de mayor cuantía; y si corresponde al de paz, podrá solicitarlo verbalmente.

Téngase presente, por último, que la ejecucion de lo convenido ha de llevarse á efecto precisamente en la forma y por los trámites ántes indicados: se estima para ello como cosa juzgada, y ya no puede entablarse pleito ordinario sobre el mismo asunto, como se espuso al principio del §. 2.° de la seccion anterior.

SECCION VIII.

DE LA CONCILIACION EN ASUNTOS DE COMERCIO.

En el artículo **COMPARECENCIA EN LO MERCANTIL** (pág. 785 y siguientes del tomo X) espusimos algunas consideraciones acerca de la legislacion, que entonces regia sobre la conciliacion en negocios sujetos á la jurisdiccion de comercio, indicando las dudas y dificultades que se ofrecian en la práctica, por no estar bien determinado si debia regirse enteramente por la ley comun, ó si quedaban en vigor algunas disposiciones de su legislacion especial, copiada en dicho artículo, que podrá consultarse como parte de esta materia. En el dia ya no existe motivo alguno para tales dudas.

Por los artículos 10 y siguientes del decreto del Gobierno provisional, de 6 de Diciembre de 1868, estableciendo la unidad de fueros, elevado despues á ley por la de las Córtes constituyentes de 20 de Junio de 1869, quedaron suprimidos los tribunales especiales de comercio, encargando á la jurisdiccion civil ordinaria el conocimiento de todos los asuntos judiciales, que eran de la competencia de aquellos. Se ordenó á la vez que los procedimientos en dichos negocios, con escepcion de los de quiebra y de apremio, se arreglaran á las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, y se derogaron las disposiciones del Código de comercio y de su ley de Enjuiciamiento de 24 de Julio de 1830, relativas á jurisdiccion y procedimientos, salva la escepcion indicada. Iguales disposiciones se dictaron para Ultramar por los artículos 9 y siguientes del decreto del propio Gobierno provisional, de 1.° de Febrero de 1869.

En dicha derogacion se comprendió todo lo relativo á la *comparecencia* ante los jueces avenidores, y en su virtud los actos de conciliacion en asuntos de comercio han quedado enteramente sujetos á la ley de Enjuiciamiento civil, tanto en la Península como en Ultramar. De consiguiente, se rijen hoy en todo por las mismas reglas establecidas para los negocios comunes, y les es aplicable, por tanto, cuanto hemos espuesto en las secciones anteriores.

SECCION IX.

DE LA CONCILIACION EN MATERIA CRIMINAL.

La ley de Enjuiciamiento civil no contiene disposicion alguna relativa á la conciliacion en las causas criminales, porque su único objeto son los procedimientos civiles; pero se halla establecida en la legislacion anterior. La Constitucion de 1812 dispuso en su artículo 282, que debia presentarse al alcalde de cada pueblo, como conciliador, el que tuviera que demandar *por injurias*. La ley de 3 de Junio de 1821, restablecida en 1837, declaró que debia preceder el medio de la conciliacion en los pleitos por *injurias*, en que sean demandados eclesiásticos ó militares, del mismo modo que cuando se demanda á los demás ciudadanos. Y el reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1833 dijo tambien en su art. 21: «Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion y que ésta no ha tenido efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil,..... ni tampoco querella alguna *sobre meras injurias*, de aquellas en que, sin detrimento de la justicia, se repara la ofensa con sola la condonacion del ofendido.»

Nótese que todas estas disposiciones solo hablan de *injurias*, y sin embargo en la práctica se consideran tambien comprendidas en ellas las causas de *calumnia*. La razon es, porque la legislacion que regia cuando aquellas se dictaron, comprendia la calumnia entre las injurias, como una especie de éstas:

no se hallaba establecida la distincion entre la injuria y la calumnia, que despues ha hecho el Código penal, y ambos delitos estaban por tanto comprendidos en la letra y espíritu de la ley. Y aunque el Código penal estableció dicha diferencia, como, segun él, lo propio que antes sucedia, no puede procederse en uno ni otro caso sino á querella de la parte ofendida, la cual puede perdonar á su ofensor y relevarle de toda pena, aun despues de haber recaido sentencia ejecutoria, se ha estimado con razon que debia seguir la práctica anterior de no admitir las querellas de injuria ni de calumnia, sin haber intentado préviamente la conciliacion, puesto que en ambos casos puede repararse la ofensa con solo la condonacion del ofendido, sin detrimento de la justicia.

Cuando esto no es procedente, tampoco debe intentarse la conciliacion. Así sucede en todos los casos, en que la injuria y la calumnia deben perseguirse de oficio, lo cual tiene lugar siempre que la ofensa se dirije contra la autoridad pública, constituya ó no desacato, y contra corporaciones ó clases determinadas del Estado (1). En estos casos, la injuria ó la calumnia no infiere agravio solamente á la persona particular; sino á la institucion que representa, y no hay ni puede haber términos hábiles para que esa misma persona, en su carácter privado, renuncie la satisfaccion que se debe á la autoridad ó á la clase ofendida. Dicha circunstancia eleva el delito á la categoría de *público*, y no puede subordinarse á la conciliacion.

Por razones de otro órden, tampoco están sujetas á la conciliacion prévia las injurias livianas de obra ó de palabra, que constituyen una simple falta, y no dan lugar á procedimiento escrito (2). Debiendo castigarse en juicio verbal, es innecesario el acto prévio de conciliacion, porque en ese mismo juicio puede el ofendido darse por satisfecho con las esplicaciones del injuriante, y aun despues de haberse dictado sentencia condenatoria, puede estinguirse la pena con el perdon de la parte ofendida.

Hay además, otros delitos, que tampoco pueden perseguirse sino á querella, instancia, ó denuncia por lo ménos, de parte agraviada, como son los de adulterio, violacion, estupro, y rapto ejecutado con miras deshonestas, en los cuales tambien se estingue la accion penal con la condonacion del ofendido. La ley, sin embargo, no ha creido conveniente sujetarlos á la conciliacion prévia por altas razones de moralidad y de conveniencia pública. De suerte que la conciliacion en materia criminal está limitada á las demandas de injuria y de calumnia contra particulares, cuando la ofensa constituye delito.

Antes de la ley de Enjuiciamiento civil la conciliacion en materia criminal se regia por las mismas reglas que la civil, así respecto del procedimiento, como de la autoridad ante quien habia de celebrarse. Publicada dicha ley, como sus disposiciones están limitadas á los procedimientos civiles, y no se confirió á los jueces de paz, en su virtud creados, jurisdiccion ni facultades para entender en ninguna clase de asuntos criminales, ocurrió la duda de si la conciliacion en estos asuntos deberia seguir subordinada á las disposiciones anteriores, y celebrarse por tanto ante los alcaldes conforme al Reglamento provisional. Aunque hubo casos en que así se practicó, la jurisprudencia resolvió la duda á favor de los jueces de paz y del procedimiento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. Así se resolvió tambien por Real órden de 19 de Febrero de 1857, que sólo se comunicó á la Audiencia de Valladolid, sin duda por que se dictó á consulta de la misma. Este tribunal, en vista de las dudas ocurridas á varios jueces y promotores fiscales de su territorio, acordó, que los jueces de paz debian entender en todos los juicios ó actos de conciliacion, ya se refiriesen á querellas criminales, ya á cualquiera otra clase de negocios; y este acuerdo fué aprobado por dicha Real órden. La razon de la indicada jurisprudencia es bien óbvia. La conciliacion, aunque se intente como acto prévio de un juicio criminal, es de naturaleza

(1) Art. 391 del Código penal antiguo y 482 del reformado en 1870.

(2) Núm. 4.° del art. 493 del Código penal antiguo, y 1.° del 605 del reformado.

meramente civil, puesto que en ella no puede tratarse de la pena personal que haya de sufrir el delincuente; sino de la condonacion de la ofensa, y de la indemnizacion de perjuicios en su caso. En el dia ha cesado todo motivo de duda, puesto que por la nueva ley de organizacion del poder judicial se han conferido á los jueces municipales todas las atribuciones judiciales, que aun venian desempeñando los alcaldes, y especialmente la de intervenir en la celebracion de los actos de conciliacion (1), sin escepcion alguna.

Aunque la conciliacion en materia criminal se rige, como hemos dicho, por las reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil, esto ha de entenderse en cuanto al procedimiento y á la intervencion del juez de paz; pero no en lo relativo á la competencia respectiva de estos mismos jueces. Estaba declarado por el Tribunal Supremo de Justicia (2), que no son aplicables á este caso las reglas de competencia establecidas en dicha ley; sino que han de tenerse presentes, para su decision legal, las prescripciones ordinarias, relativas á las causas criminales, y «que con arreglo á ellas causa fuero preferente el lugar en que el delito se cometió.» Pero esta jurisprudencia ha sido modificada por el artículo 300 de la ley de organizacion del poder judicial, de cuya disposicion, que es comun á los negocios civiles y criminales, segun el epígrafe del capítulo á que corresponde, ya nos hicimos cargo en el §. 3.° de la seccion IV de este mismo artículo. Segun ella, ya no causa fuero preferente para el acto de conciliacion el lugar del delito; sino el del domicilio del demandado, y en su defecto el de la residencia.

Concluirémos, pues, indicando que hoy es aplicable á la conciliacion en materia criminal cuanto hemos espuesto en dicha seccion IV, y en las siguientes hasta la VII inclusive de este mismo artículo.

(1) Art. 270, núm. 1.°, de la citada ley de 15 de Setiembre de 1870.

(2) Sentencia de 14 de Diciembre de 1864, decidiendo una competencia entre el juez de paz del distrito del Hospital de Madrid y el del distrito de la Plaza de Valladolid, sobre el conocimiento de un acto de conciliacion, intentado para entablar una querella de injurias cometidas por medio de la imprenta.

SECCION X.

DE LA CONCILIACION, CUANDO EL DEMANDADO GOZA DE FUERO ESPECIAL.

La obligacion de intentar la avenencia antes de promover un pleito es una regla general, segun ya hemos dicho, y como tal comprende á todos los litigantes, salvas las escepciones establecidas por la ley, que tambien hemos espuesto anteriormente. Estaban, pues, sujetas á esa regla las personas y las cosas que gozaban de fuero especial.

La ley de 3 de Junio de 1821, que estableció algunas de las escepciones que hoy existen, dijo á este propósito: «En los pleitos civiles ó por injurias, en que sean demandados eclesiásticos ó militares, debe preceder el medio de la conciliacion prescrito por la Constitucion, del mismo modo que cuando se demanda á los demás ciudadanos» (art. 1.°). Y pasando despues á determinar la competencia del juez conciliador para los aforados, ordenó tambien, que la conciliacion debia celebrarse ante los alcaldes, sin perjuicio del fuero del demandado para no ser juzgado sino por su juez competente, cuando no se conciliaran las partes (art. 2.°).

Esto no obstante, quedó subsistente el fuero privilegiado para hacer efectiva la multa, en que incurrieran los aforados por la falta de asistencia al acto de conciliacion. Aunque competia al alcalde la imposicion de esta pena, venía establecido que se procediese á su exaccion por el juez privativo del multado (art. 9.°). Y todavía se estendia más el respeto que aquella ley tributó al fuero privilegiado: llegado el caso de cumplir lo convenido en el acto conciliatorio, correspondia, segun ella, al juez privativo esa ejecucion (art. 8.°).

Así vino observándose aun despues de publicada la ley de Enjuiciamiento civil, hasta que la jurisprudencia decidió este punto con sus importantes declaraciones. Por el artículo 1414 de dicha ley se mandó, que todos los jueces y tribunales, cualquiera que fuese su

fuero, que no tuviesen ley especial para sus procedimientos, los arreglaran en los pleitos y negocios civiles, de que conocieran á las disposiciones de la nueva ley. Aunque los términos de esta prescripcion revelan perfectamente su espíritu, quedaba duda acerca de lo que debia entenderse por ley especial de procedimientos; pero el Tribunal Supremo de Justicia declaró en repetidos fallos, que para los efectos de dicho artículo ha de entenderse como tal la ley que comprenda un sistema completo de enjuiciar, y no la que tenga solamente relacion con algunos puntos particulares del enjuiciamiento. En su consecuencia, debian quedar sometidos á la ley moderna los tribunales y juzgados de Guerra, Marina y Estranjería, los de Hacienda y los eclesiásticos.

Y se bizo más todavía: fijando el genuino sentido de la ley en lo relativo al acto de conciliacion, se decidió, que lo convenido en el antiguo juicio de conciliacion con anterioridad á la nueva ley, debia llevarse á efecto por los trámites y jurisdiccion en esta establecidos, pues el cumplimiento de toda obligacion «debe subordinarse á las leyes de procedimientos que rijan al tiempo en que haya de ejecutarse;» y que esta ejecucion correspondia por tanto al juez de paz ó al de primera instancia respectivo, segun la cuantía; por lo cual, y por no existir jueces de paz fuera de la jurisdiccion ordinaria, esta era la única competente para llevar á efecto el convenio, aunque fuese aforado de guerra el demandado (1). Antes y despues de esta declaracion, se han dado varias otras por el mismo Tribunal Supremo estableciendo, que si bien el artículo 8.° del decreto de Córtes de 18 de Mayo de 1821 (ley de 3 de Junio) atribuye á la jurisdiccion militar la facultad de llevar á efecto lo convenido en un *juicio* de conciliacion, si gozase de fuero de guerra la persona contra quien deba procederse, dicha disposicion debe entenderse derogada en virtud del artículo final de la ley de Enjuiciamiento civil; y que segun la disposicion terminante del art. 218 de la propia ley, única aplicable al caso, y la doctrina derivada de la misma, consignada por el Tribunal en diferentes resoluciones, corresponde al juez de primera instancia respectivo llevar á efecto lo convenido en acto de conciliacion, si su valor esccde de la cantidad prefijada para los juicios verbales; y no escediendo, al juez de paz, cualquiera que sea el fuero del demandado (1).

Despues de tan terminantes decisiones, se publicó por el ministerio de la Guerra una disposicion enteramente contraria á la jurisprudencia establecida. Nos referimos á la Real órden de 17 de Febrero de 1868, por la cual se declaró, que cuando se cite á un militar ó aforado de guerra para celebrar acto de conciliacion, está obligado á comparecer ante el juez de paz, con tal que la citacion se verifique por conducto de la autoridad militar de quien dependa; y que cuando la ejecucion de lo convenido en el acto celebrado requiera que se proceda contra él, es propia privativamente de la jurisdiccion militar. Pero esta declaracion, que pugnaba con la ley y con la jurisprudencia constante del primer tribunal del reino, en el cual reside la facultad omnímoda y esclusiva de resolver los conflictos de jurisdiccion y determinar la competencia de los demás tribunales y juzgados, no podia sobreponerse á una doctrina tan repetidamente sancionada; y así lo estableció el mismo Tribunal Supremo en el primer conflicto á que aquella dió lugar (2). De este modo quedó tambien decidido que los juzgados de Marina habian perdido su competencia para conocer de los actos de conciliacion que se hubiesen de celebrar con sus aforados, á pesar del Real decreto de 6 de Enero del propio año 1868, en que se habia dispuesto, que

(1) Sentencia de 23 de Noviembre de 1858, decidiendo una competencia entre el juzgado de la capitanía general de Cataluña y el de primera instancia del distrito de San Beltran de Barcelona.

(1) Sentencias de 19 de Noviembre de 1857, 5 de Febrero de 1861 y otras, decidiendo competencias entre la jurisdiccion ordinaria y la militar.

(2) Sentencia de 12 de Mayo de 1868, decidiendo á favor del juez ordinario del distrito de la Magdalena de Sevilla una competencia con el de Marina de la misma ciudad.

los comandantes de las provincias marítimas continuaran ejerciendo la jurisdiccion de paz y avenencia, por medio de juicios verbales, que les concedia el art. 31 de la Ordenanza de matrículas.

Tales son las vicisitudes por que ha pasado la institucion del acto conciliatorio, relativamente á las jurisdicciones especiales. Pero todo ello pertenece ya á la historia, por efecto de las reformas recientes, que han venido á poner término á la empeñada lucha que se sostenia sobre esta importante materia. El decreto del Gobierno Provisional de 6 de Diciembre de 1868 sobre unidad de fueros, que hoy tiene fuerza de ley, ha dejado establecido que la jurisdiccion ordinaria es la única competente para entender en los asuntos civiles, quedando por lo tanto suprimidos los fueros especiales; y la ley provisional sobre organizacion del poder judicial ha sancionado el mismo principio diciendo: «La jurisdiccion ordinaria será la competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio español, entre españoles, entre estranjeros, y entre españoles y estranjeros (artículo 267).» «Corresponderá á los jueces municipales, en materia civil, intervenir en la celebracion de los actos de conciliacion (artículo 270).»

SECCION XI.

DE LA CONCILIACION EN ULTRAMAR.

Los beneficiosos efectos de la conciliacion prévia debieron hacerse estensivos á las provincias de Ultramar, con la publicacion en las mismas del Reglamento provisional para la administracion de justicia, de 26 de Setiembre de 1835, que por Real órden de la propia fecha se comunicó á aquellas Audiencias para su cumplimiento. Pero la diferente organizacion judicial y el estado social de cada una de dichas provincias ofrecia dificultades para el planteamiento de tan importante reforma, las cuales se fueron venciendo en Cuba y Puerto-Rico por autos acordados de las Audiencias, y por disposiciones del Gobierno. Así es que mientras en la isla de Puerto-Rico se planteó desde luego, en la de Cuba no tuvo lugar hasta que dictó reglas para ello la Audiencia de la Habana, por auto acordado de 21 de Mayo de 1841, disponiendo que debia celebrarse el acto ante cualquiera de los gobernadores, tenientes gobernadores, alcaldes ó jueces ordinarios del domicilio del demandado, en los casos y forma que prevenia el Reglamento provisional antes citado, con las modificaciones que á la vez creyó oportuno introducir en sus disposiciones, en virtud de las facultades que le estaban conferidas, para que pudieran aplicarse sin inconveniente.

No sucedió así en Filipinas. En aquel territorio no han podido vencerse todavía las dificultades que sus costumbres y su estado social oponen al establecimiento de la conciliacion, como requisito prévio á toda demanda susceptible de avenencia. Tanto es así, que en la Real cédula de 30 de Enero de 1855, por la que se introdujeron importantes reformas en la administracion de justicia de todas las provincias de Ultramar, al tratar de la conciliacion, se limitó á Cuba y Puerto-Rico, como puede verse en la *parte legislativa* de este artículo; y lo propio se hizo por el Real decreto é instruccion de 9 de Diciembre de 1865, pues se limitó tambien á dichas dos provincias la publicacion y planteamiento de la ley de Enjuiciamiento civil y el establecimiento de los juzgados de paz. En la esposicion que precede á dicho decreto se consignó que no podia hacerse estensiva á las islas Filipinas la ley de Enjuiciamiento civil, porque «el estado social del país, con sus costumbres primitivas y con sus instituciones tradicionales, hacen de todo punto imposible la aplicacion de sistemas inventados para satisfacer las exijencias de una civilizacion adelantada.»

Por Real órden de 11 de Febrero de 1853 se aprobó un «*reglamento* para los juicios de paz ó de conciliacion y sobre el modo de llevar á cabo las providencias en ellos consentidas,» el cual se circuló á las Audiencias de la isla de Cuba y á la de Puerto-Rico, á fin de que rigiera desde luego en sus respectivos territorios, uniformando así la administracion de justicia en el particular á que se refiere. En dicho reglamento se refundieron las dis-

posiciones que regian en la Península sobre juicios de conciliacion, con las modificaciones necesarias para que pudieran aplicarse en aquellos países. Se atribuyó el cargo de conciliador á los alcaldes ordinarios en los pueblos de su residencia, y á los capitanes de partido y sus sustitutos en los pueblos rurales. Se estableció el principio general de que no podria entablarse en juicio ninguna demanda civil ó mercantil, ordinaria ó ejecutiva, de tercería, de divorcio y de estupro simple, ni querella alguna sobre injurias, en que pudiera repararse la ofensa con solo la condonacion del ofendido, como son las palabras llamadas *de la ley*, sin hacer constar que se habia intentado el medio de la conciliacion y que no habia tenido efecto, y se determinaron á la vez los juicios esceptuados de dicho acto. Se dictaron reglas para el procedimiento, y muy circunstanciadas para que el mismo juez conciliador llevase á efecto lo convenido, previendo los diferentes casos que podian ocurrir. Y se declaró tambien que el alcalde que hubiere intervenido en el acto de conciliacion, no podia conocer como juez del litigio sobre el mismo particular. Nos limitamos á estas indicaciones por no estar ya vigente dicho reglamento, y porque pueden verse sus importantes disposiciones en la *parte legislativa* de este artículo.

No fueron menos importantes las disposiciones sobre esta materia, contenidas en la citada Real cédula de 30 de Enero de 1855. Una de las atribuciones, que por el art. 2.° de la misma, y confirmando lo que ya estaba mandado, se confirieron á los alcaldes ordinarios de las islas de Cuba y Puerto-Rico y á los capitanes de partido de la primera, fué la de conciliar á los que intenten promover algun litigio, y llevar á efecto lo convenido en el juicio de paz, cualquiera que sea el fuero de los que en él comparezcan; pero se declaró á la vez, como estaba prevenido para la Península, que en el caso de suscitarse alguna cuestion de derecho, debian aquellos cesar en su jurisdiccion y remitir las actuaciones al juez ordinario competente, y si el demandado gozaba de fuero especial, al juez del fuero privilegiado á quien correspondiera (art. 114). Tambien se mandó que los jueces de paz debian proceder en los actos de conciliacion en los términos y con las formalidades prevenidas en el reglamento de 21 de Febrero de 1853, antes mencionado, cuya observancia se encargó igualmente á las jurisdicciones especiales (arts. 3.° y 113). Y se declaró asimismo que los juicios de paz podian celebrarse en los dias feriados, despues de los divinos oficios; pero no las diligencias para la ejecucion de lo convenido, las cuales, por tener ya el carácter de judiciales, únicamente podian practicarse en los dias hábiles para administrar justicia (art. 4.°).

Tal era la legislacion que regia en las islas de Cuba y Puerto-Rico, cuando por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865 se ordenó que se promulgara en dichas islas la ley de Enjuiciamiento civil, y que comenzara á regir en ellas el dia 1.° de Julio de 1866, debiendo ser de obligatoria observancia para todos los tribunales y juzgados, cualquiera que fuese su fuero, que no la tuviesen especial para sus procedimientos. Esto último se repitió despues, con relacion á los juzgados del fuero de Guerra y de Marina, por Real órden de 13 de Junio de 1866.

Como consecuencia de aquella disposicion, se mandó por Real órden de la propia fecha, que se establecieran, como se establecieron, en las referidas islas jueces de paz, suprimiéndose los juzgados de avenencia que existian en virtud de las disposiciones del Código de comercio y de la ley de su Enjuiciamiento especial. En su artículo correspondiente podrá verse la organizacion de dichos juzgados de paz, análoga á los de la Península, los cuales tienen, como estos, la competencia esclusiva para conocer de los actos de conciliacion conforme á la ley de Enjuiciamiento civil. Y por la disposicion 20 de la citada Real órden de 1865 se declaró que, cuando un juez de paz haya de demandar á uno de sus suplentes, ó vice-versa, en acto de conciliacion, y no hubiere más jueces de paz en el pueblo, corresponde al otro suplente el conocimiento del asunto; y en su defecto, al alcalde y los tenientes del mismo, con sujecion á las reglas establecidas en dicha ley; y que donde hubie-

re más de un juez de paz, deberá el demandante acudir primero al más antiguo de la misma clase, segun el órden numérico, despues á los suplentes, en la misma forma, y por último á los alcaldes ó tenientes.

En todo lo demás que se refiere al acto de conciliacion, rige hoy en las espresadas islas la ley de Enjuiciamiento civil, y es por tanto aplicable en aquellos juzgados todo lo que hemos espuesto en las precedentes secciones. Mas, para llevar á efecto lo convenido en el acto conciliatorio, debe tenerse presente, que compete esta facultad al juez de paz, cuando la cuantía del asunto, sobre que hubiere recaido el convenio, no escediere de 400 escudos, que es el máximum señalado para los juicios verbales, por el artículo 2.° de la instruccion de 9 de Diciembre de 1863. Si escediere de dicha cantidad, corresponderá la ejecucion al juez del partido. En tales casos, no debe el juez de paz actuar con escribano, como prevenia el reglamento de 1853; sino con su secretario, segun se declaró por Real órden de 28 de Enero de 1868.

Por decreto de 29 de Octubre de 1869, se hizo tambien estensiva á las islas de Cuba y Puerto-Rico la ley de 25 de Junio de 1867, que modificó el título XII de la de Enjuiciamiento civil, referente al juicio de desahucio, y por consiguiente, debe admitirse allí, como en la Península, la demanda de desahucio sin que la preceda el acto de conciliacion.

Téngase presente, por último, que establecida tambien en Ultramar la unidad de fueros, por decreto del Gobierno Provisional de 1.° de Febrero de 1869, la jurisdiccion ordinaria es en el dia la única competente para llevar á efecto lo convenido en acto de conciliacion, cualquiera que sea el fuero del demandado, y para la exaccion de las multas que se impongan por la falta de comparecencia al acto, lo propio que en la Península. Dicha multa, que ha de ser de 6 á 60 reales, segun el artículo 209 de la ley de Enjuiciamiento civil, en Ultramar debe arreglarse al valor de su moneda, computándola al respecto de dos y medio por uno (1).

(1) Art. 1.° de la instruc. de 9 de Diciembre de 1865.

CONCILIAR. Lo que corresponde á un Concilio, como sus cánones, sus decretos, y las instituciones que de él proceden. Así los Seminarios diocesanos se llaman *Conciliares*, por haber sido solemnemente instituidos por el Concilio de Trento.

CONCILIAR (EN LO JUDICIAL): véase CONCILIACION.

CONCILIO. Del latin *Concilium*. En el artículo CONCILIABULO, hemos indicado ya el orígen romano de ambas voces, espresando siempre una y otra, asambleas deliberantes, congregacion organizada de personas, mas numerosa y formal la primera, que la segunda, y ambas en su orígen para tratar de asuntos civiles.

Es vária y oscura la etimología de *Concilium*, pues *Conciliabulum*, segun indicamos en su lugar, era como diminutivo de ésta. Segun unos, se dijo *Concilium* de *concedo*, caminar juntamente; y en sentido figurado caminar á un mismo propósito; ó acaso de *cum*, preposicion comunitiva, y de *cilia* los párpados, tomados por los ojos, y de ahí *cumcilium*, *mirar varios* á un fin. (San Isidoro, *Etimologías*, cap. 28). Segun otros, de *consedeo*, sentarse juntamente ó en sesion (Doujat): segun otros, en fin, del verbo *concálo*, convocar. (Varron, *De lingua latina*, lib. 5.°)

En analogía á lo dicho, es de notar que los griegos, á las mismas asambleas, llamaron y llaman en sentido eclesiástico *synodos*, de *syn*, conjunto ó simultáneamente, y *odos*, vía ó camino, y por tanto, caminar varios á un fin.

Hemos indicado en otra parte tambien, que la Iglesia católica adoptó desde luego estas denominaciones: primero, para las reuniones de los fieles en las iglesias y capillas; luego específica y técnicamente, para sus asambleas sagradas deliberantes, ó sean los *Concilios*. La iglesia ha adoptado asimismo la palabra *sínodo*, en sentido genérico, unas veces y como Concilio en general; otras en sentido específico, como en sínodos diocesanos.

La celebracion de los Concilios, como asambleas sagradas deliberantes, se remonta al tiempo de los Apóstoles, como se vé ya en el *Concilio de Jerusalen*, con ser que cada Apóstol reunia en sí la autoridad de resolver, y

la singular supremacía, que era de suponer en los que habian oido la salvadora doctrina de boca del Divino Maestro, y recibido su autoridad de sus manos; y además San Pedro, con superioridad de cabeza de la Iglesia, como si en la celebracion de aquel Concilio, hubieran querido establecer y autorizar desde luego una norma para el modo de ser y de definir de la Iglesia, que, una como su Autor, aparecia en el mundo para ser *católica*, esto es, universal, y por tanto, para la lucha inevitable con todas las creencias opuestas, existentes y sucesivas, para consolidar y mantener la justa armonía con las potestades seculares, para instruir y fortificar en el dogma y en las costumbres á todos sus fieles.

No nos incumbe tratar esta importante materia bajo el punto de vista dogmático y teológico; sino como puede tratarla una obra de derecho, esto es, hablando de una Iglesia, implantada en el Estado político, y por tanto, con los mismos súbditos, y en su consecuencia, en relacion á un mismo tiempo, con la política y con la disciplina externa, y por tanto con la legislacion civil.

Bajo tales conceptos, y adoptada la voz por la Iglesia, dícese Concilio toda reunion de obispos y prelados católicos, legítimamente convocada y presidida hasta el fin, para tratar y decidir sobre puntos de fé ó de disciplina. Y de paso, indicamos las bases cardinales para la legalidad del Concilio: convocacion, presidencia, cualidad episcopal ó prelacial, y catolicismo de los convocados; y en la forma, que tiene recibida la práctica, y reseña la historia, aprobacion, ó confirmacion pontificia en su caso. Faltando esas condiciones, la asamblea no será Concilio; sino *Conciliábulo*, ó *Conventículo*.

Decimos cualidad prelacial, y no episcopal aisladamente, porque vamos hablando genéricamente de los Concilios, y no de cada clase de ellos; y es sabido, no solo que á veces, aun á los Concilios generales concurren prelados y presbíteros con los obispos, en la forma que diremos; sino que hay Concilios solo de prelados regulares. Y decimos, en fin, que se reunen para tratar de la fé ó de la disciplina, porque, si bien sobre dogma no pueden definir irrevocablemente sino los generales, de la disciplina interna y externa, y aun de la fé, pueden tratar todos; no definitivamente, pero sí esplicándola, como se vé en los Concilios nacionales, y aun provinciales, rechazar el error de los priscilianistas, arrianos, etc., salvo siempre lo que defina el Concilio general.

Divídense los Concilios en *generales* y *particulares*, y de todos haremos mencion, pues aun esa clasificacion necesita esplicarse.

Concilios generales. Cuando esta palabra se refiere á los que se forman por convocacion de todos los obispos de la Iglesia católica, es lo mismo que *universales*, ó *ecuménicos*: cuando no, equivale á *nacionales*: diferencia que ha de notarse y determinarse con rigorosa precision. Así se comprende y esplica perfectamente que en el lenguaje canónico, y aun por cartas pontificias, como las del Papa San Leon Magno á los reyes y obispos de España, se llaman *generales* algunos de los Concilios, que les encargaban convocar y celebrar contra los priscilianistas; cuando solo eran Concilios nacionales, pues solo habian de ser convocados los obispos de la España goda.

Puede decirse en otra forma, que la frase *Concilios generales*, tiene una acepcion general, y otra mas restricta, segun que se trate de Concilios *ecuménicos*, ó solo de los *nacionales*, ó sea de todos los obispos de un estado soberano, siempre en el supuesto de que no es la denominacion la que da esencia y naturaleza al Concilio; sino la doctrina y enseñanza de la iglesia, que siempre ha entendido por *ecuménico* el universal, ó de toda la iglesia.

En tal supuesto, Concilios generales, universales, ó ecuménicos, cardinalmente, ó *á priori*, son aquellos, á que son legítimamente convocados todos los obispos de la Iglesia católica: *Universalia Concilia sunt, quæ Sancti Patres ex universo orbe, in unum convenientes, juxta fidem evangelicam, et apostolicam, condiderunt* (*Can.* 1, *Dist.* 1.ª).

Los Concilios se llaman tambien generales

ó ecuménicos, si bien *á posteriori*, cuando, no habiendo sido, por circunstancias, convocados á ellos todos los obispos de la Iglesia, despues se adhieren á las decisiones los no convocados, resultando así la aprobacion de la Iglesia universal, cual sucede respecto de varios Concilios de Oriente, por ejemplo el primero y tercero de Constantinopla, celebrados solo por los obispos de Oriente, adhiriéndose luego los de Occidente, y por este medio recibidos hoy y enumerados por la Iglesia entre los *ecuménicos*.

Eso, cuando los no concurrentes no habian sido convocados; pues habiéndolo sido, por haber sido universal la convocatoria, esta circunstancia asegura el concepto de universal al Concilio. De otro modo, seria imposible haber celebrado, ni celebrarse ningun Concilio general, pues siempre faltan, y por causas, hasta justas, es imposible que dejen de faltar algunos, y aun muchos de los convocados.

No hay que decir que, en este punto, las locuciones *universo, orbe, toto orbe*, todo el mundo, etc., no han de tomarse geográficamente; sino por *toda la cristiandad*, por todas las regiones, á que se ha estendido ó estiende el cristianismo; de otro modo no habria habido aun ningun Concilio ecuménico, ó universal. Así dichas locuciones se limitaban en los primeros tiempos al imperio romano, pues que á solo él se estendia el cristianismo; luego á muchas otras regiones; hoy al universo, pues á todo él se ha estendido ya el cristianismo.

Viene agitándose, hace tiempo, la cuestion sobre la necesidad y conveniencia de los Concilios generales, ya bajo el punto de vista de las dificultades que ofrece su reunion y celebracion, ya sosteniendo bastar para toda definicion y declaracion de fé, la supremacía del Papa, auxiliado, en su caso, como él lo estime. Sostuvieron ya la polémica, como es sabido, Bossuet y el cardenal Orsi, y hoy la aborda mas de frente De Maistre (*Del Papa*, lit. 1.ª, cap. 3).

Y ciertamente que, no estando ya limitado el mundo cristiano, como en los primeros siglos, á la dominacion romana; sino que, penetrando la civilizacion europea, y con ella la luz del Evangelio, en todo el globo habitable, las dificultades de todo género aumentan. Y no es la mas grave, sin embargo, aunque lo es mucho, la convocatoria en las naciones católicas, y en las que, si no tienen ministros diplomáticos católicos, la córte romana tiene agentes diplomáticos, y por su medio, ó por el de una potencia amiga, á quien se encomiendan los súbditos católicos, puede llegar la bula de convocacion á los metropolitanos, y á su vez la de insinuacion, de deferencia y anuencia, al soberano del país. Pero la locomocion y traslacion de tal personal, á tales distancias, y con gastos tan incalculables, es inmensa; agravándola aun las implicaciones de la política, de las creencias, la tendencia de la civilizacion, y el rumbo imponente de las doctrinas y de la ciencia. Con todo, mientras la Iglesia, con su suprema autoridad, no marque otro rumbo, los Concilios generales pertenecen á su alto régimen.

Y en la cuestion de convocatoria, ¿á quién corresponde, pues que de la legitimidad de ella penderá la del Concilio, que, en otro caso, no seria sino conciliábulo? Parece que sobre ello no podia haber duda, ni lugar á cuestion. Si se trata de la Iglesia universal, y ésta es considerada como un cuerpo; lo mismo reunida, que sin reunirse en asamblea, es imposible concebirla sin su cabeza, interviniendo como tal. No siempre se ha realizado, y demos que pudiera suceder en las complicaciones crecientes de los tiempos, que alguna vez no se realizase la *inducion* pontificia; pero esta circunstancia habria de subsanarse, como muchas veces se ha realizado, respecto de los Concilios de Oriente, por la confirmacion, ó aprobacion posterior; quedando así conciliados los derechos y reintegradas las funciones del cuerpo místico de la Iglesia. Así lo tienen recibido la práctica y la historia, y constituido el derecho canónico: *Multis denuo apostolicis, et canonicis, atque ecclesiasticis instruimur regulis, non debere, absque licentia Romani Pontificis, Concilia celebrare* (*Cán.* 5, *Dist.* 17, *y por toda ell.*).

Suya es tambien la presidencia, si concurre; y en otro caso por delegacion: *Romanus Pontifex, per se, vel per legatos suos, ha-*

bet Concilio œcumenico præsidere, dice tambien el derecho. Sin que obste el caso del celebérrimo Concilio de Nicea, presidido por el insigne español Osio, obispo cordubense, que se sabe lo presidió, ó que por lo menos firma el primero, con ser que habia legados pontificios, en lo que no puede menos de verse la justa intervencion, el asentimiento y la autorizacion de la suprema cabeza de la Iglesia.

Precisamente así es como hay que interpretar la convocatoria para alguno de los Concilios de Oriente, verificada por sus Emperadores. Lo que, no bien interpretado, pudiera parecer cuestion de arbitrariedad é intromision, se traduce bien, por la inversa, en cuestion de garantía y proteccion en aquellos tiempos de debilidad, en la naciente y con frecuencia perseguida Iglesia; mucho más, supuesta la aprobacion pontificia, y la de la Iglesia universal, que en tan alta estima tiene los Concilios de Oriente.

Hoy, el derecho público eclesiástico, despues del siglo X, ni aun permite hacer de ello cuestion; así como no la admite la debida y justa conveniencia de contar, como no obstante la nueva disciplina, se cuenta, con la suprema autoridad secular, pues el grande hecho, que tanto se liga al órden público, ha de realizarse en sus dominios, ó de ellos ha de partir, para mas ó menos tiempo, el episcopado. Por causa de proteccion tambien, porque así queda favorablemente prevenido el supremo gerarca, para luego admitir, sin controversia, el Concilio entre sus leyes; y por la conveniente armonía, que nunca será bastante bien encarecida, entre la Iglesia y el Estado. Véase aun lo que decimos al hablar de la convocatoria de Concilios nacionales y provinciales.

Está admitido en doctrina, y es decision del Concilio general de Constanza (ses. 24), que un Concilio general, puede convocar otro Concilio, lo cual no falsea el principio del derecho de convocar, y autorizar, pues siempre media la aprobacion y autoridad pontificia.

Mas árduo es el caso de que, urgiendo una necesidad suprema de que la Iglesia se reuna en Concilio general, no haya Pontífice, ó de haberlo, se halle incapacitado, como aprisionado o detenido por fuerza mayor, implicado en cisma, ó notoriamente en heregía, perturbado en su razon, ú otras situaciones análogas. Algunos de estos casos se han verificado ya, como el de cisma: y como en los de necesidad suprema, la necesidad hace ley, los canonistas admiten, que en situacion tan lamentable, la Iglesia se reunirá en Concilio, sin convocatoria pontificia, lo que no escluye despues el asentimiento y aprobacion de la suprema cabeza. (Bossuet, defen. declarat, libro 3, cap. 1.°)

Sobre la convocatoria, está en la fuerza de las cosas que sea el Pontífice, como cabeza y supremo gerarca en la Iglesia, el que comunique á las iglesias, y á los soberanos temporales, las definiciones del Concilio para conocimiento y ejecucion. Así vemos que lo hicieron ya en su tiempo los Papas San Leon el Magno y San Inocencio III, como en los últimos tiempos Pío IV, el Concilio de Trento. Por la fuerza de las cosas tambien se incluye y comprende en esta comunicacion autocrática una tácita, aunque espresiva confirmacion del Concilio. A mayor abundamiento la historia eclesiástica registra ya, y trasmitirá el hecho notable de que los PP. del Concilio de Trento pidieren expresamento al Papa la confirmacion de este, y Pío IV la otorgó, por bula de 26 de Enero de 1564. La propia confirmacion y publicacion autoritativa ha tenido lugar en nuestros tiempos de la parte dogmática y disciplinaria, llevada á término por el interrumpido Concilio Vaticano.

Ya hemos indicado la justicia, y la alta conveniencia además, de contar con las potestades seculares, no siendo la menor de las razones el facilitar y asegurar por este medio la promulgacion y ejecucion del Concilio en sus Estados, admitiéndolo entre sus leyes. Y no es que estas puedan penetrar en el dogma, el cual no es alterable nunca por la potestad temporal, ni por ninguna otra; y no porque, si aquella no lo aceptara, no sea, y haya de ser siempre el mismo para los hijos de la Iglesia; sino porque así se garantiza mas su observancia; y muy principalmente por la parte disciplinaria, de la disciplina esterna sobre

todo, que afecta, ó puede afectar derechos é intereses temporales: concepto, en el que, el propio Concilio de Trento ofreció dificultades en Francia y otros Estados, para su aprobacion: y si bien en España fué admitido y publicado sin dilacion; no sin la cautela y salvedad de que más adelante hacemos mérito.

Bajo este punto de vista, bajo la evidente utilidad de la Iglesia, de ver elevadas sus disposiciones disciplinarias á *nomo-canones*, es digna de mencion la política de Justiniano: *Sancimus vicem legum obtinere sanctos ecclesiasticos canones, qui à sanctis quatuor conciliis expositi sunt et confirmati* (Novel. 131.) *Neque civiles leges crimen inultum relinquent, eo quód à præcedentibus per imperatoribus, et à nobis ipsis recte dictum est, suas regulas pro legibus valere* (Novel. 137.)

Antiguamente la *indiccion* ó convocatoria pontificia se hacia por Bula á los metropolitanos, que, obtenida la vénia del Soberano temporal, lo hacian saber á los sufragáneos, y éstos y aquellos á los demás sacerdotes, prelados abaciales ó dignidades que, por la bula, ó por práctica recibida, debieran asistir. Hoy se espiden dos bulas al mismo efecto: una para los metropolitanos, y otra para el Soberano temporal, dándole conocimiento, rogándole permita la asistencia á los arzobispos y obispos, é invitándole á asistir el mismo, como varios príncipes y emperadores lo han verificado, aunque sin voto deliberativo.

Es antigua la práctica de admitir en los Concilios, como auxiliares con voto consultivo, á presbíteros, dignidades, jurisconsultos y canonistas. Segun el ritual romano, «*omnes episcopi, et majores illorum, id est, cardinales, patriarchæ, primati, et archiepiscopi: nec non abates, et denique omnes prælati, qui, secundum forma juramenti, quod prestant, cum ad dignitates promoventur, ad Concilium generales, id est, ubi Papa præsidit, aut alius ejus nomine, ire tenentur, tanquam vocem deliberativam habentes, seu definitivam: principes, autem seculares, tanquam consultivam.*» En cuanto á los simples presbíteros, y auxiliares legos, la práctica ha sido vária, y ciertamente, si su concurrencia es como auxilio, se comprende que se estime escusada, si no se reputa necesaria, lo cual somete la cuestion en cada caso á la prudencia del Concilio. El de Trento procedió estrictamente en ello, y aun dificultó la admision de presbíteros delegados, ó vicarios, de los obispos, que no podian concurrir por sí: práctica que no puede menos de reconocerse plausible, pues nunca el delegado es el principal; y solo razones de incontestable necesidad y justicia pueden autorizar lo contrario.

Espresando un Concilio general una grave necesidad de la Iglesia, y siendo tales sus inevitables dificultades, claro es que la misma necesidad y el estado del mundo, determinarán el momento. Con el mejor celo, el Concilio de Basilea determinó que volviese á celebrarse Concilio general, pasados cinco años: otro Concilio general siete años despues, y luego periódicamente de diez en diez años; y no solo es un hecho, que así no se realizó, sino que han corrido 300 años desde el Concilio de Trento, último general, hasta el Concilio Vaticano, que, reunido el 8 de Diciembre de 1869, y constituido en Roma, ha sido suspendido por circunstancias políticas conocidas.

En conclusion, en punto á Concilios generales, diremos, que, como se ve, el derecho y el deber de concurrir es radical en el episcopado. De aquí nace la doctrina corriente, de que, si se presentase en el Concilio algun obispo, no convocado, ó no notificado, sin mas que examinar, si es tal obispo católico, y que no está excomulgado, debe ser admitido.

Cuestiónase, por último, si un Concilio general, y lo mismo hay que decir de los demás Concilios, debe ceñirse en sus decisiones al objeto especial, para que ha sido convocado, y si todo lo demás á que las estienda será nulo. Algun hecho notable pudiera persuadirlo así. El Papa San Leon confirmó las decisiones del Concilio de Calcedonia, menos en lo relativo al patriarcado de Constantinopla, dando por razon la de que el Concilio no habia sido convocado para esto, y sí únicamente para tratar de los errores de Dióscoro y Eutiques. A este hecho, se opone otro, no menos autorizado. El célebre Concilio de Ni-

cea fué convocado solo contra Arrio, y para fijar la celebracion de la Pascua; y, sin embargo, hizo 20 cánones sobre otros puntos, que fueron recibidos y siempre respetados por la Iglesia universal. En tal caso, la justicia, la importancia y la necesidad de la determinacion decidirán de la aprobacion: esta es la regla.

Como suplemento á esta parte del artículo, anotamos á continuacion los Concilios, recibidos como generales por la Iglesia universal, con la ligera restriccion que diremos, en cuanto á algunos de los seis últimos, notando de paso que, de estos seis Concilios no se hace mencion en el Cuerpo del derecho, como posteriores á él, y que se ha disputado la *ecumenicidad* de los mismos; pero de la del de Florencia y del de Trento ya no hay ni aun cuestion.

Notaremos asimismo que Felipe II aceptó sin dilacion, y mandó la observancia del de Trento, como ley del Reino, por real cédula de 12 de Julio de 1564 (ley 13, tít. 1.°, libro 1.°, Nov. Rec.). Prestado este solemne homenaje á la Iglesia y al Sumo Pontífice, que le mandó el texto del Concilio para su admision por España, expidió, sin embargo, cédulas reservadas á las dos Chanchillerías, explicando y dejando á salvo las regalías de la Corona, sin debilitar en su fondo la aceptacion del Concilio.

He aquí ahora la nota de los 21 Concilios generales, ó ecuménicos, así reputados:

1.° Nicéa, año 325, contra Arrio: el Papa S. Silvestre.

2.° Constantinopla (1.°), 381, contra Macedonio: S. Dámaso.

3.° Efeso, 431, contra Nestorio: S. Celestino.

4.° Calcedonia, 451, contra Nestorio, Eutiques y Dióscoro: S. Leon.

5.° Constantinopla (2.°), 553, por los tres capítulos: Papa Vigilio.

6.° Constantinopla (3.°), 680 á 682, contra los monotelitas: S. Agaton.

7.° Nicéa (2.°), 787, contra los iconoclastas: Adriano I.

8.° Constantinopla (4.°), 869 á 870, contra Fócio: Adriano II.

9.° Letran (1.°), 1123, por los cismas: Calixto II.

10. Letran (2.°), 1139, cisma de Arnaldo de Brescia: Inocencio II.

11. Letran (3.°), 1179, varias heregías: Alejandro II.

12. Letran (4.°), 1215, contra los albigenses y otros hereges: Inocencio III.

13. Leon (1.°), 1245, levantamiento de tropas por Federico II: Inocencio IV.

14. Leon (2.°), 1274, por causa de los griegos: Gregorio X.

15. Viena, 1311 á 1312, á causa de los Templarios: Clemente V.

16. Pisa, 1409.

17. Constanza, 1414 á 1418, gran cisma de Occidente: Martino V.

18. Basiléa, 1431, sobre reforma: Eugenio IV.

19. Florencia, 1439: Eugenio IV.

20. Letran (5.°), 1512 á 1516: Julio II y Leon X.

21. Trento, 1545 á 1563, contra Lutero, Calvino y Zuinglio: Paulo III (Julio III y Pio IV.)

Nota. Un nuevo Concilio general, el más numeroso que se ha conocido, pues se acercan á 800 los Padres, y de todos los ángulos del globo, fué convocado por Pio IX y abierto en el Vaticano, el 8 de Diciembre de 1869. Denomínase, por ello, *Concilio Vaticano*. Cuando se imprime este artículo ha dictado ya algunos cánones sobre la fé, que asimismo han sido confirmados y publicados por constitucion pontificia de Pio IX, que lo convocó. Ya queda indicado que este Concilio ha sido suspendido y por qué.

La autoridad de los Concilios generales es tal, que algun Pontífice declaraba tener en tanto los cuatro primeros, como á los cuatro Evangelios.

Concilios particulares. Conocido el número de los Concilios generales, y vista en su artículo la nota y la clase de los conciliábulos y conventículos, claro está que todos los demás, de que pueda hacerse mencion, son particulares. No atenúa su importancia la denominacion; y antes los hay, que sus cánones se citan con el respeto y confianza que

los de un Concilio general, salva la autoridad dogmática definitiva. Tales son, el de Ancira, metrópoli de la Galacia, celebrado en 314, concurriendo 80 obispos: hizo 24 cánones: el de Neocesarea, metrópoli del Ponto, por los años de 315: hizo 14 cánones: el de Gangrés, metrópoli de la Paflagonia, en la misma diócesis póntica, á principios del siglo IV: hizo 20 cánones: el de Antioquía, capital de Siria, del año 341, con 99 obispos: se conocen 28 cánones, que se citan sin nombrarlos de ordinario de Antioquía, por cuestion que no es de este lugar; y el de Laodicea, capital de la Frigia pacaciana. Se refiere al año 364. Se conocen de él 59 cánones. En todos estos Concilios cuentan los griegos un cánon mas.

Reconócese tambien en el mismo sentido, la importancia de los Concilios de Africa, los de la Galia, de los de Toledo, como diremos: y con honra nuestra, califícase de famoso el Concilio de Elvira, ó sea el de *Illiberis* ó *Elliberis*, ciudad que fué de la Bética, muy cerca de Granada. Se refiere al año de 300, con 19 obispos, entre los que firma el segundo el célebre Osío. Hizo 91 cánones, muchos de los cuales pasaron al cuerpo del derecho. Véanse aun otros de reconocida importancia, al hablar de Concilios generales.

Los Concilios particulares se clasificaban en lo antiguo en diocesanos, provinciales y episcopales. Los primeros eran los celebrados por los metropolitanos y obispos de varias provincias reunidas, como la Grecia, el Africa. Estinguido el imperio romano, equivalian á estos Concilios los llamados regionales, como los de la Galia y España. Provinciales eran los de cada metrópoli, y por tanto los celebrados por cada metropolitano y sus sufragáneos: episcopales, los que hoy lleven esa misma denominacion. Y habia tambien los que se han llamado Concilios *perpétuos* y Concilios *mistos*.

En la moderna disciplina, los Concilios particulares se dividen en nacionales, provinciales y episcopales ó diocesanos, y algunos autores hablan de Concilios de regulares. De todos hacemos mérito á continuacion.

Concilios nacionales. Cuando, dividido el imperio romano, las antiguas regiones ó provincias, tuvieron soberanía, adquirieron propiamente el carácter político de nacion, y los Concilios celebrados por los metropolitanos y obispos de cada una, se llamaban nacionales. Tales son los de la Galia y los de España, denominados tambien toledanos, porque, como veremos, se celebraban en Toledo, que al fin fué la córte y la iglesia primada.

La antes *provincia* ó *region hispánica*, ahora un tanto ampliada, monarquía goda, comprendia las provincias eclesiásticas, ó metrópolis de Sevilla, Narbona, Mérida, Toledo, Braga y Tarragona.

La importancia de nuestros Concilios nacionales, cuya calificacion se dá tambien á los de Orleans y de Cartago, es tal, que algunos de ellos son calificados de *cuasi generales*, en cuyo caso se encuentran los llamados tambien de Occidente, como los celebrados en Italia por los papas Félix III, contra Acacio; Celestino, contra Nestorio; San Leon, contra Eutiques; Martino y Agaton, contra los monotelitas; Estéban IV contra los iconoclastas, y Nicolás I y Adriano II contra Focio.

Algunos cánones (c. 6, dist. 17), atribuyen al Papa la convocatoria aun de los Concilios particulares, y por tanto la de los nacionales y provinciales; pero hoy, en la actual disciplina no es así, salvo aquellas que, en calidad de soberano temporal, le plazca convocar en sus estados, como es práctica general, que, á su vez, los convoquen los demás soberanos. En España ha sido siempre así. Y aunque la convocatoria por el soberano temporal disonara en algunos Estados, disonaria menos, ó no disonaria de ninguna manera, en España, por cuanto sus monarcas, á esta cualidad, unen las de su patronato universal eclesiástico, y la cualidad de defensores de los cánones. Velan y deben velar en este concepto sobre la disciplina, y bajo el punto de vista de la conveniencia: nadie mejor que ellos puede apreciar las circunstancias de seguridad y posibilidad, y sus cartas, como *de ruego* y *encargo*, á los metropolitanos para la reunion y celebracion del Concilio, conciertan los derechos respectivos, y el justísimo miramiento debido á esta alta clase. Nada se opo-

ne á que el episcopado á su vez acuda al Soberano, esponiendo la necesidad del Concilio y que por ello se mueve aquel á la convocatoria. Puede además tenerse por cierto que el Soberano procurará conocer de antemano la opinion de los metropolitanos, y por tanto de la Iglesia nacional.

Grave seria siempre la dificultad de hacer venir á Concilio provincial ó nacional á los obispos de Ultramar, en aquellas naciones, que tienen colonias lejanas, á que como España, han poseido mayores territorios en el resto del Mundo que en la Península. Pero esa es cuestion de prudencia en el Soberano, que convoca, y por otra parte, la índole de los Concilios particulares, no determina con absoluta necesidad su estension, ni de ella pende precisamente su autoridad, como de la *ecumenicidad* en los generales. Hay el medio tambien de hacer celebrar Concilios provinciales en aquellas regiones, como en nuestras Américas han tenido lugar, los de Méjico y Lima. Véase **CONCILIOS DE ULTRAMAR.**

Pero otra cosa es cierta tambien, y es que ya, en el hecho, pueden considerarse en desuso los Concilios nacionales: efecto sin duda de que, despues de los primeros tiempos y de las multíplices declaraciones conciliares, ya en punto á la fé, ya sobre todo á la disciplina, la necesidad de ella es menor; al paso que la sobrevenida diferencia en la division y estension de los Estados, así como en las creencias, aumenta la dificultad. Son en esto una gran razon los siglos que han pasado en España sin Concilio nacional; bien que en principio y en doctrina nada se opone á su celebracion. No hay que notar que en España, como esponemos en otro lugar, los Concilios nacionales, son los, por antonomasia, llamados de Toledo, durante la dinastía goda.

Concilios provinciales. Desde luego ha de entenderse *provincias eclesiásticas*, esto es, una metrópoli ó arzobispado con sus sufragáneos. A veces han concurrido tambien á estos Concilios prelados de mas de una provincia.

Estos Concilios, en un principio y durante los siglos medios, fueron frecuentes, y era así una necesidad, ya por los frecuentes errores que por ese medio se esclarecian en su orígen, y no siempre llegaban á heregías; ya por lo vacilante de la disciplina, ya, en fin, porque dichos Concilios recibieron el carácter de tribunales, y á ellos iban en apelacion las causas eclesiásticas. Por esta consideracion eran y se reputaban de necesidad tan frecuentes, que por lo menos debian celebrarse dos veces al año. *Propter ecclesiasticas causas, et quæ existunt controversias disolvendas, sufficere nobis visum est, bis in anno per singulas provincias episcoporum Concilium fieri.* (Can. Propter. Dist. 18). Sobre el período de la celebracion de estos Concilios, lo propio habian inculcado algunos generales, como el de Nicéa, los de Constantinopla y aun el de Calcedonia. Cesaron las apelaciones á estos Concilios; pero se ampliaron sus importantes atenciones; y el Concilio de Basilea determinándolas, recomienda aun la frecuencia en su celebracion.

No eran solo las atenciones propias de los mismos lo que habia que tener en cuenta al fijar el período de su celebracion; sino tambien las dificultades locales y de los tiempos. Así en España, por el Concilio III de Toledo (Conc. 18), se ordenó: «*Consulta itineris longitudine, et paupertate ecclesiarum Hispaniæ, semel in anno, in loco, quem metropolitanum, elegerit, episcopi congregentur... die kalendarum Novembris*»: lo cual se reprodujo por los Concilios 6.° y 12. El 2.° de Nicéa ordenó tambien la celebracion *semel in anno*, pronunciando excomunion contra los Soberanos, que se opusieren á ello, y penas canónicas contra los metropolitanos, que sin causa legítima, dejaren de asistir. En 1215 el Concilio 4.° de Letran renovó esta prescripcion, estableciendo penas contra los obispos negligentes. El Papa Juan XXII fijó la celebracion cada tres años, lo cual adoptó el Concilio de Trento (ses. 24, cap. 2 *de reform.*), y ese es el derecho actual. Nada prohibe, que con perentoria necesidad, el Concilio se reuna dentro de ese trienio; ó como lo perentorio del caso hiciere necesario: pero en el hecho hace tanto tiempo ya que entre nosotros no se celebran Concilios provinciales, que parece que aun han caido en desuso; siendo mas de notar

todavía tal estado de cosas en cuanto á sínodos episcopales, como diremos.

Previene el mismo Concilio de Trento, que cuando no pueda convocar el metropolitano, lo verifique el obispo mas antiguo de la provincia, y que hayan de asistir todos los obispos de ella, y todos los demás, que, por derecho ó por costumbre, están en aptitud de hacerlo, siendo siempre escepcion el caso de peligro ó justa imposibilidad, lo que habrá de esponerse al convocante, que á su vez dará conocimiento al Concilio.

Consultados el derecho y la costumbre, en cada provincia, tienen en lo general el derecho y la obligacion de asistir, segun los cánones:

El arzobispo (*Can. Plausit, Dist.* 18); los obispos, el cabildo catedral, *collegialiter sedens*, los abades mitrados, los delegados de obispos y abades imposibilitados, los cabildos colegiales, deanes, arciprestes, párrocos.

La disciplina general, segun queda espuesta, fija principios para resolver en cualquier caso, quiénes asisten á estos Concilios con voto deliberativo, ó meramente consultivo; y suelen determinarlo además las constituciones sinodales.

En España, segun prácticas recibidas, bien que la convocatoria para los concilios provinciales sea del monarca, nunca se verificaria, ni debe verificarse, sino con recíproco acuerdo y conveniente inteligencia, entre el Soberano y el episcopado. Así es fundado en todo acto esterior, que se ligue notablemente al órden público, y que puede, por tanto, hasta necesitar proteccion, y así está en las prácticas de España y en las condiciones singulares, antes espuestas, de sus monarcas. Todavía, para traer las cosas en el particular al punto de mayor armonía, en el convenio pontificio de 29 de Agosto de 1589, adicional al concordato de 1851, se estableció que «el gobierno de S. M. C., correspondiendo á los deseos de la Santa Sede, y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposicion á promover, no solo los intereses materiales, sino tambien los espirituales de la Iglesia, declara que, sobre la celebracion de sínodos provinciales, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede.» (Art. 19.)

Concilios episcopales ó diocesanos, mas comunmente llamados *sínodos diocesanos*. Son los que celebra cada obispo con su clero catedral y parroquial, segun el derecho, las costumbres y las constituciones sinodales. Nada mas útil y adecuado, que estos sínodos, para fomentar en la diócesis el fervor, reprimir abusos, vigorizar la disciplina, dar conveniente impulso á la accion directiva, y autoritativa del clero, y por este medio fomentar y realzar el sentimiento y las prácticas religiosas.

Es evidente á todas luces, que los sínodos, la visita diocesana y la accion del arciprestazgo, constituyen la base del régimen episcopal. Y sin embargo, hace ya muchos años que en España no se celebran, reservándonos para otro lugar, el examinar las causas de ello. Desde luego en el convenio pontificio de 1859, artículo antes citado, al propio tiempo que se habla de los concilios provinciales, se declara, que «el gobierno de S. M. no pondrá óbice á la celebracion de sínodos diocesanos, cuando los respectivos prelados estimen conveniente celebrarlos.»

Concilios de regulares. En otras partes y por algunos escritores, se llaman así las reuniones de los prelados de las órdenes religiosas, para tratar de los asuntos de las mismas. En España, se llaman *capítulos*. Véase este artículo y **COMUNIDADES RELIGIOSAS.**

Concilios perpétuos. Hay congregaciones episcopales, dicen los canonistas, que en realidad no pueden referirse á las especies de Concilios, propiamente tales; cuales son las anteriormente espuestas; y sin embargo, convienen con ellas, en ser asambleas eclesiásticas deliberantes sobre asuntos eclesiásticos. Tales son los llamados *Concilios perpétuos* y alguna vez *Concilios mistos*.

Siempre los asuntos eclesiásticos atraen á la Córte del Monarca, y detienen en ella, á los obispos y prelados, lo cual sucedia con mayoría de razon en Constantinopla, ya por la parte que los Emperadores tomaban de suyo en los asuntos de la Iglesia, ya por la disposicion del Concilio de Calcedonia, para que las reclamaciones en justicia, y cuestiones

entre partes, pudieran llevarse ante el Metropolitano respectivo, ante el *exarca*, sino, y ante el mismo Emperador, que las cometia en su caso al obispo de Constantinopla. Hubiera sido difícil y por demás dilatorio y perjudicial, convocar para asuntos frecuentes, y á las veces urgentes, un Concilio. El obispo de Constantinopla, para conocer y deliberar, reunia entónces á sí á los obispos, accidentalmente residentes en la córte imperial, y esta congregacion eclesiástica-episcopal deliberante, se llamó con fundamento *Concilio perpétuo*. (Thomasino, *De vet., et nova eclesiástica disciplina*, part. 2.ª, lib. 3.º, cap. 34: Pedro de Marca de C. S., lib. 7.º, cap. 5, núm. 9: Concilio calcedonense, cans. 9 y 17.)

Lo propio, con mayoría de razon, sucedia en Roma, en donde, para casos análogos, el Pontífice reunia á sí á los obispos *peregrinos* y al clero. Los tiempos hicieron necesario ese recurso, y ellos han hecho que deje de serlo, si bien se comprende que aun puede emplearse alguna vez.

Concilios mistos. En el rigor de los principios, no parece podia haber Concilios mistos. Porque si, como hemos dicho, Concilio es la Congregacion, legítimamente convocada, de obispos, para decidir sobre asuntos de fé y disciplina, dentro de esa esfera el Concilio es tal, y ciñéndose á ella, no tiene por qué llamarse misto, ni menos *Córte-Concilio*.

Pero las situaciones políticas se han implicado á veces. Debilitados los poderes político y eclesiásticos, los Soberanos temporales han necesitado de la cooperacion de la Iglesia y sus obispos, y esta, á su vez, de la del Soberano. Y, si en situaciones tales este pedia á la Iglesia, reunida en Concilio, su auxilio en asuntos políticos y civiles; apenas aquella podria negárselo, cuando á ella misma le era necesario, ó por lo ménos conveniente, para asegurarse el apoyo y benevolencia del Monarca.

Así habia, dicen los canonistas, *regia, seu mista concila, quæ placita, colloquia, et conventus etiam dicebantur*: los cuales, *non tantum ex regni optimatibus, et comitibus; verum etiam ex episcopis, et abatibus coalescebant, ad res civiles et eccas. tractandas.* (Thomasino lugar citado: Cavalario *Inst. jur. can.* par. 3, §. 4.)

Suponen los autores que, aunque compuesta así la asamblea, en asuntos eclesiásticos deliberan solo los prelados; en cosas civiles, solo los magnates; en asuntos mistos, todos conjuntamente. Y añade el segundo de los autores citados, que de esta clase fueron algunos Concilios de Constantinopla; en Occidente los de la Galia, y en España *los de Toledo*.

Los de Toledo, esto es, los 18, que por antonomasia se enuncian así, segun esponemos en su artículo, no fueron nunca tales. Cierto que en algunos de ellos se presentaron los Monarcas, como Recaredo en el 3.º y Chintila en el 5.º; y que los grandes y palatinos asistieron, segun diremos, en el 3.º, 8.º, 9.º, 12.º, 13.º, 15.º y 16.º; pero nunca deliberaron con los Padres, ni separados: nunca tuvieron voto deliberativo, propiamente tal: asentian como fieles; firmaban por solemnidad; pero sin ellos el Concilio no hubiera dejado de serlo.

Pero sí es cierto que asistieron, y que, como *asistentes* y *asintientes*, firmaron las actas con los PP. Cierto tambien, que los reyes, desde Recaredo, entregaban por sí, ó mandaban al Concilio, el *tomo régio*, ó esposicion de las necesidades del Estado, para las que pedian remedio, añadiendo su ruego y la necesaria autorizacion legislativa: en cuya virtud, varios de aquellos Concilios, acordaron, y canónicamente sancionaron, determinaciones de órden político y civil, que adoptadas solo por los reyes, hubieran sido verdaderas leyes y constituciones políticas y civiles. Si de esto quiere deducirse la cualidad de Concilios *mistos*, tal es el hecho, á que cada uno puede aplicar su propio criterio, y la doctrina el más conveniente. Una cosa ha de quedar en claro, y es, que, si los concilios de España en aquella época, han de llamarse mistos, no es por la razon indicada por los citados autores canónicos. En su artículo se verá tambien, que los concilios de Toledo, aunque deliberando solo los PP., lo hacian con separacion entre lo canónico y político, conservando de tal mo-

do en lo primero su carácter y autoridad de Concilio, que de los 240 cánones, que de ellos se conocen, 90, por lo menos, se hallan trasladados al cuerpo del derecho canónico.

Con menos fundamento ciertamente, pero apoyados en las circunstancias, que dejamos espuestas, algunos publicistas, como Marina, atribuyen á dichas asambleas, el carácter de *Córtes-Concilios*; y ven en ellas la iniciacion y la norma de nuestras Córtes del Reino, en los siglos posteriores. Pero, si el historiador no ha de prescindir de la índole de los hechos, ni el escritor de derecho ha de abandonar fácilmente, ni nunca, la firme base de los principios; segun una y otra base, menos que ninguna otra, cuadra á los concilios de Toledo la denominacion de Córtes.

No se concibe la idea de Córtes, ora constituyentes, ora legislativas, sin *propia autoridad* en los legisladores; y nunca, en materia civil y política, la tuvieron aquellas asambleas; sino *delegada del Monarca*; y eso, más bien, como ruego, que como mandato; ora los monarcas hiciesen esta manifestacion y encargo personalmente, ora en el *tomo régio*, ó memoria, que, como queda insinuado, enviaban al Concilio, esponiendo las necesidades y estado del país y el auxilio que reclamaban. «*De cætero* (decia Recaredo en el *tomo régio*, al Concilio 3.°), *pro hinibendis insolentium moribus, mea vobis consentiente clementia*, sententiis terminate districtrioribus, et firmiori disciplina, quæ facienda non sunt, prohibite, et ea, quæ fieri debent, immovili constitutione firmate.» No hay nada más terminante. Y todavía los PP. en las *decisiones canónicas*, y, por tanto, de propio derecho y autoridad, como Concilio, aplicaban la fórmula «*præcepit Santa Synodus*: *constituit Santa Synodus*; en los *civiles y políticos*, sin embargo, en que la asamblea procedia por autoridad no propia, sino delegada del Príncipe, era la fórmula: *consentiente Domino nostro Rege*: *Anuente Domino nostro Rege.*»

A su vez, los magnates y palatinos concurrentes no tuvieron nunca, no se diga en materia canónica, que esto seria absurdo; pero ni en materia civil y política, voto deliberativo; ni jamás asistieron *por derecho propio*. Así no se les vé en el mayor número de los Concilios; y no reclamaban, sin embargo, ni los individuos, ni la clase: y cuando asisten, es invitados por el monarca, que así lo previene á los PP. espresando la razon, como Ervigio, en el *tomo régio* del Concilio 12.°: esto es, para que con mayor facilidad y autoridad pudieran trasmitir á sus súbditos, nótese bien, no lo *que habian acordado*; sino lo que, hallándose presentes, *habian oido* de boca de los PP. «Para que (decia Ervigio), promulgationis vestræ sententias, *coram positi prænoscentes, ex illis, sibi in commissas terrarum latitudines*, inoffensibili exerant juditiorum instantia, quæ, *præsentialiter assistentes, perspicua oris vestri conceperint instituta.*» No cabe mayor evidencia sobre las facultades de estos Concilios en lo político y civil, y sobre la representacion de los grandes y palatinos.

Y con mayor precision aun, en el *tomo régio* á los Concilios 8.°, 12.°, 13.° y 16.°, dicen los Monarcas á los PP., hablando de los magnates: «*quos interesse huic Sanctæ Synodo delegit nostra sublimitas.*»

No se concibiria, por otra parte, que de 18 Concilios, solo aparezcan los grandes en 7; y de éstos, en el 3.° se sabe que asistieron con Recaredo para abjurar el arrianismo.

Entra por mucho aun el reducido número, en que con esos Concilios asisten; y eso, en tal desproporcion con la clase en todo el Reino, y con los PP. en los mismos. No consta cuantos se presentaron en el 3.° con Recaredo; pero al 8.° concurrieron 17, siendo 25 los PP.: al 9.° solo 4, siendo aquellos 25: 15 al 12.°, siendo los PP. 42: 26 al 13.°, siendo los PP. 83: 17 al 15.°, siendo aquellos 76; y 16 al 16.°, siendo los PP. 67.

Véanse Concilios de Toledo: Aguirre, *Collect. magn. Concilior. Hispan*: Florez, *España Sagrada*: Villodas, *Concilios*: y *Coleccion de Cánones de la Iglesia de España*, por Tejada y Ramiro. Sobre Concilios generales y algunos otros importantes, véase todavía el artículo de cada uno de ellos, segun su denominacion local, de la cual nos apartamos en los de Toledo por una razon especial.

CONCILIOS DE TOLEDO.

La importancia de este artículo nos hace adelantarle á su denominacion local. Son aquellos, sin duda, todos los celebrados en dicha ciudad, ó en su diócesis, bajo la convocatoria y presidencia de su metropolitano, en todas las épocas, y sin distinguir entre los nacionales, provinciales y diocesanos. Mas por antonomasia, entre juristas de uno y otro derecho, se comprenden en la enunciativa, solo las 18 principales, durante la dominacion goda: monumento de tan alto y merecido aprecio y respeto en la historia y en el derecho, entre nacionales y extranjeros, que no podria negárseles un lugar en la ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO. Y habrá de dispensársenos, si concedemos á éste asunto mayor estension que la que podria bastar en otro caso, como quien se deja cautivar de una gloria nacional, que tanto se liga en la historia y la legislacion, á otra no menor, ni menos celebrada por su época, cual es el *Fuero Juzgo*.

Hemos indicado, que éstos, en el sentido del presente artículo, son 18, ordinalmente numerados, en la forma siguiente:

1.°, celebrado el año 400 de Jesucristo. Promedia, como se vé, entre la dominacion romana, que declinaba, y la goda que empezaba.

2.°, en 527. Habian pasado, segun se nota, 127 años. La dominacion goda, pues, se habia estendido y afirmado; pero los Reyes eran arrianos, como Amalarico, que reinaba á la sazon. Por consecuencia, la iniciativa para los Concilios era, hasta entónces, de los metropolitanos, y en su caso, del Papa.

3.°, en 589. Reinando Recaredo, que lo convocó, y en él abjuró el arrianismo. Desde este Concilio, la convocatoria fué ya de los Reyes, como católicos todos.

4.°, 633, Sisenando.
5.°, 633, Chintila.
6.°, 638, Id.
7.°, 646, Chindasvinto.
8.°, 653, Recesvinto.
9.°, 653, Id.
10.°, 656, Id.
11.°, 675, Wamba.
12.°, 681, Ervigio.
13.°, 683, Id.
14.°, 684, Id.
15.°, 688, Egica.
16.°, 693, Id.
17.°, 694, Id.
18.°, 702, Witiza.

Esta numeracion ordinal no es moderna. Ya la siguió el Indico de los antiguos cánones, que estuvo en uso en la iglesia española; y el toletano 13.°, en el cánon IX, confirmando el anterior, reunido en el primer año del reinado de Ervigio, tambien la adopta, puesto que dá á este el número 12.°: «*Licet unanimi consensionis nostræ judicio gesta synodalia Toletani Concilii duodecimi acta sunt, atque disposita, quæ anno primo gloriosi principis Ervigii in hac urbe regia celebrata sunt.*»

Y sin embargo esta numeracion, en sentido absoluto es inexacta. Consta de actas y otros documentos, que conservamos, la celebracion de otros 6 concilios toledanos, antes del comunmente clasificado en el 4.° lugar.

Antes del Concilio 1.°, año 400 de J. C., hubo otro general en la misma ciudad, para juzgar á varios priscilianistas. Si bien no poseemos sus actas, la *sentencia definitiva* del que viene denominándose 1.° no deja lugar á duda. Haciendo en ella los Padres una historia de las maquinaciones de los herejes, despues del Concilio de Zaragoza, dicen que habian declinado presentarse ante el sínodo convocado en Toledo, y que aunque lo hiciera el obispo Sinphosio, y declarara que se apartaba de contar entre los mártires á los que los sectarios calificaban de tales, lo habian hallado posteriormente envuelto otra vez en las malas doctrinas «*et si prius nidietum in Toletana urbe concilium declinarant, ad quod illos evocaveramus et audissemus... patuit respondisse Sinphosium se á recitatione eorum, qui dicebant mártires, recessise, ac dehinc deceptum, tectumque, per plurimos secus aliqua gesisse reperimus.*» Se deduce de este texto que antes del Concilio, en que reunidos hablaban los Padres, hubo otro en Toledo, y no solamente que fué convocado, como quiere Ferreras, sino celebrado en efecto, pues en

aquel supuesto los Padres, no habrian dicho que los herejes declinaran el *prius indictum Toletanum concilium*, por cuanto nadie puede declinar el tribunal que no existe. Añádase que nos dicen que Sinphosio, despues de abjurar en él sus errores, habia recaido. No hablan, por lo tanto, del sínodo que entonces celebraban, ya porque no podian adivinar que Sinphosio, despues de renunciar ante él las malas doctrinas, habia de reincidir, ya porque consta por la epístola de San Inocencio á los padres toledanos que aquel obispo, con posterioridad á su retractacion en el Concilio del año 400, conservó pura la fé. Por otra parte los obispos, redactores de la *sententia definitiva*, no se refieren en las palabras que hemos transcrito al Concilio de Zaragoza de 380, convocado tambien para condenar la herejía priscilianista, y al que asistió Sinphosio; porque entonces éste aun no estaba en el error, firmando aquellas actas, como juez, no como reo; y prescíndase ya de que el propio texto se opone á esta opinion, suponiendo el Concilio á que hace referencia, reunido en Toledo.

No puede determinarse, por falta de documentos, con toda precision, el año en que tuvo lugar. D. Francisco Huerta, en sus *Anales de Galicia*, afirma ser constante que se celebró en 376; pero no apoya su dicho en razon alguna. Lo único que parece cierto es que fué anterior al año 400, porque el Concilio congregado en éste habla de él, segun se acaba de manifestar. Sin embargo, atendiendo á que son á él anteriores unas cartas de San Ambrosio, escritas despues del Concilio Casaraugustano, puede colocarse en los últimos años del siglo IV.

En el tiempo transcurrido entre el sínodo del año 400, y el denominado 2.°, de 527, hubo otros dos en la misma ciudad, reunidos con motivo de la expresada herejía de Prisciliano.

El Concilio 1.° habia conservado en sus sillas á los obispos reconciliados Sinphosio, Dictinio y otros, que abjuraron las malas doctrinas en su seno. Esta sentencia no fué del agrado de algunas iglesias de la Península, dando márgen á un cisma, semejante al de los luciferianos. El Pontífice San Inocencio, con el santo fin de restituir la paz, escribió á los obispos españoles, para que, reunidos en Toledo, leyesen su carta y aplicasen los remedios que en ella dictaba. Sin duda alguna estos, tan rígidos observantes siempre de los preceptos canónicos, y tan reverentes á la silla Apostólica, obedecieron su mandato; mas no conservamos las actas del sínodo con esta ocasion celebrado.

Algunos, fundados en el epígrafe de la carta «*Universis episcopis Toletana synodo constitutis,*» quisieron creer que fué dirigida al Concilio del año 400, y negaron consiguientemente la existencia de este otro; pero sin razon atendible. Mal podia dirigirse el Pontífice al Concilio 1.°, cuando en el tít. 3.° supone muerto á Patrunio, que lo presidiera, y lo dá reemplazado por Gregorio. El epígrafe de la epístola tiene otra más exacta esplicacion. Como el santo prescribia la reunion del Concilio en Toledo y que en él se leyese su misiva, lo supone ya al tiempo de la lectura, y de ahí que la dirija «*universis episcopis, Toletana synodo constitutis.*»

Tampoco puede fijarse el año de este. Debió, sí, ser entre el 402 y el 409, porque en el 1.° ascendió San Inocencio al Pontificado y refiere en el exordio de su epístola, que empleó algun tiempo en escribirla, y en el 2.° invadieron los bárbaros la Península y él supone que aquí reinaba la paz.

La herejía priscilianista volvió á renacer en Galicia, á mediados del siglo V. Por cuya razon Santo Toribio, obispo de Astorga, escribió á San Leon Magno en solicitud de remedio del mal. El Pontífice, contestándole, despues de refutar la herejía, le dice que ya habia escrito á los obispos de España para que celebrasen Concilio general; pero si esto no pudiese verificarse por la calamidad de los tiempos, que á lo ménos lo hiciesen los de Galicia. Los obispos de las provincias Bética, Lusitana, Tarraconense y Cartaginense, reverenciando los mandatos de la Silla Apostólica, celebraron, en efecto, Concilio, adoptando en él la regla de fé del 1.° de Toledo y remitiéndola á Balconio, metropolitano de Braga. Así lo espone el 1.° de esta ciudad.

«*Cujus etiam præcepto Tarraconenses et Cartaginenses episcopi, Lusitani quoque et Bætici, facto intersse Concilio, regulam fidei contra Priscillianam hæresim... ad Balconium tunc hujus Bracarensis ecclesiæ præsulem, direxerunt.*» De dicha profesion de fé se deduce que Toledo fué el lugar de la reunion.

Tambien es incierto el año, pudiendo solamente afirmarse que, no sólo fué posterior al 446, en que San Leon ocupó el sólio Pontificio; sino al 21 de Julio del inmediato siguiente, porque esta es la fecha de su epístola.

El códice Emilianense trae las actas de un Concilio general en Toledo, celebrado en el reinado de Recaredo, era 633 (597 de J. C). Los códices Albelanense y Soriense dan noticias de otro provincial en la misma ciudad, reunido bajo el Rey Gundemaro, en la era 648 (de J. C. 610).

Balucio pretende negar la existencia de los dos sínodos anteriores, fundándose en que los códices, que los contienen, fueron escritos en tiempos de Alonso VI, conquistador de Toledo, y muy aficionado á las prerogativas de esta ciudad, y que por consecuencia de esto, para complacer al Monarca, los escritores de aquellos códices los fingieron. El argumento de Balucio está apoyado, prescindiendo de otras razones, en una base falsa. El códice Vigilano se escribió en el año 976, es decir, 107 antes de la conquista; y el Emilianense en el 974, esto es, 72 antes de la restauracion, en 1086 de aquella Iglesia: son por lo tanto, anteriores ambos, no sólo al reinado; sino al nacimiento del conquistador de Toledo.

Con anterioridad al Concilio 4.°, aunque cercano á él, sin que pueda fijarse el año, hubo otro provincial en la ciudad, segun se desprende de una carta de San Isidoro al metropolitano cartaginense, San Eladio.

De lo dicho resulta, que, aun sin hacer mencion del conciliábulo, reunido por Leovigildo, para conseguir la imposible armonía entre el dogma católico y el error arriano, hubo en Toledo, fuera de la recibida numeracion, 6 Concilios que, unidos á los 18, comunmente designados, forman 24. Nada se dirá de otro que algunos escritores, entendiendo erradamente unas palabras de San Isidoro, suponen celebrado en tiempo de Theudis, porque no vemos dato alguno digno de ser tenido en cuenta para adoptar esta opinion. Creemos que dichos escritores se confunden con el segundo de 527 y año 5.° del reinado de Amalarico.

Convocatoria. En punto á ella, se deben separar los Concilios anteriores á Recaredo de los que continuaron celebrándose, desde el reinado de este Monarca, hasta la invasion. Los 3 primeros fueron bajo la dominacion romana: los 2 siguientes cuando ya los godos arrianos se enseñorearon de una gran parte de la Península: á saber, de las provincias Tarraconense, Lusitana, gran porcion de la Bética, y la region de la Cartaginense, llamada Carpetania, en la que se encontraba Toledo, punto de reunion.

No puede aplicarse á estos Concilios la disciplina establecida en aquella época en el Oriente. En esta parte del Imperio los Sínodos diocesanos se hicieron ordinarios, desde el ecuménico Constantinopolitano 1.°, siendo de esto inmediata consecuencia que no fuera preciso el consentimiento especial y espreso del Emperador para convocarlos. Y como, por otro lado, los metropolitanos, en virtud de la consagracion estaban sujetos al Patriarca, de ahí que éste fuese la autoridad legítima para su reunion y celebracion. Empero: en el Occidente, en que nunca tuvieron este carácter ordinario, si se esceptúa el obispo de Roma, que tenia derecho, segun consta por el Concilio romano de 501, para reunir el sínodo, formado por los obispos de la prefectura romana y la Italia, propiamente dicha, no habia una autoridad ordinaria, que, por efecto de la ordenacion de los metropolitanos, estuviese facultada para convocar estos concilios, llamados nacionales y semejantes á los diocesanos del Asia. Los obispos de Africa eran convocados por el exarca de Cartago, no precisamente en virtud de derecho propio, sino por acuerdo y consentimiento mútuo. El obispo romano, no obstante, como Primado de la Iglesia universal, podia mandar y en efecto mandaba á los prelados de una nacion ó de una *diócesis*, que celebra-

sen Concilio general, cuando las circunstancias de sus iglesias lo hacian preciso. Esta autoridad no era ordinaria, sin embargo, y solo en casos escepcionales usaba de su derecho, siendo base de todo su prerogativa de supremacía.

De todo se deduce que se ignora quién haya convocado los concilios de Toledo de 396 y de 400. Quizá la necesidad de su celebracion, que la estendida herejía priscilianista hacia urgente, hizo confluir los ánimos de los obispos al mismo fin. Quizá el metropolitano más antiguo, que tenia el derecho de presidirlos, habria sido el que, tomando la iniciativa, se dirigió á sus coepíscopos, haciéndoles ver la gravedad del mal, la urgencia del remedio, y designando en su consecuencia el sitio de la reunion. Si esto fué así, Patrunio metropolitano de Mérida, que presidió el Concilio 1.°, fué tambien el que lo convocó, pues en cuanto al de 396, cuyas actas no existen, no se puede señalar su presidente, aunque es de creer que fuese el mismo Patrunio, que ya ocupaba la silla emeritense.

No hay las mismas dudas acerca de los 2, que á estos se siguieron, porque están comprendidos en el ya citado caso de que el Pontífice creyese necesario usar de su autoridad universal. San Inocencio manda en su epístola 27 de la *Coleccion Española*, á los obispos de toda la Península que se congreguen en sínodo, para que, decidiendo los puntos de discordia, restablezcan la calma turbada con motivo de los decretos formados en el del año 400: «*Quare incumbendum est dilectioni vestræ, et bonis sacerdotibus admittendum, quatenus præeunte doctrina in unitatem catholicæ fidei, omnes, qui dispersi sunt, congregentur.*»

Datos más seguros y estensos nos suministra la epístola de S. Leon Magno sobre el Concilio general, que en su tiempo se celebró, en Toledo. En ella dice á Santo Toribio: que habia escrito á los obispos de las provincias Tarraconense, Cartaginense, Lusitana y Galáica, para que se reuniesen en Concilio, y le encomienda poner en conocimiento de sus coepíscopos lo que ha determinado. «*Dedimus itaque litteras ad fratres, et coepiscopos nostros Tarraconenses, Carthaginenses et Lusitanos atque Gallæcos, eisque concilium synodi generalis indiximus. Ad tuæ dilectionis sollicitudinem portinebit, ut nostræ ordinationis auctoritas ad prædictarum provinciarum episcopos deferatur.*»

El Concilio toletano 2.° fué provincial, y por esto no existen respecto á él, y á su convocacion, las anteriores dudas. La disciplina vigente entonces, como ahora, concede el derecho de procedencia al metropolitano. Y por cuya razon Montana, que gozaba de esta preeminencia en la Carpetania, segun consta del cánon 5.° del mismo Concilio, y de la epístola de aquel al clero y pueblo de Palencia, fué el que lo congregó. A pesar de que los Reyes godos estaban inficionados de la herejía arriana, parece que concurrió el asentimiento de Amalarico para celebrarlo. Lo dejan deducir por cierto las últimas palabras de los padres. «*Deinde domino nostro Amalarico regi Divinam clementiam postulantes, qui innumeris annis regni ejus, ea quæ ad cultum fidei perveniunt peragendi, nobis licentiam præstet.*»

Abrazada la fé católica por Recaredo, sufrió un gran cambio la disciplina sobre este punto, como resultado necesario de las nuevas relaciones, que se crearon entre la Iglesia y el Estado.

Los Concilios, 3.° y siguientes, fueron convocados por el Rey, sin excepcion, así los nacionales, como los provinciales. Esto relativamente á los primeros no es peculiar de nuestra nacion; sino general á todas las en que el Soberano profesaba la verdadera fé. Ni debe tampoco concretarse á los nacionales evidenciándose por la historia, actas conciliares y epístolas pontificias, que tambien en los ocho primeros ecuménicos tuvieron gran intervencion los Emperadores. No es este el lugar oportuno para justificar la regalía de la potestad temporal, si bien en el artículo anterior la exponemos. Aquí nos limitaremos á esponer la disciplina de nuestra iglesia.

La legitimidad de la Real convocatoria en este sentido, fué reconocida por los obispos españoles y por los mismos Romanos Pontífices. Desde que los Reyes Suevos, abjuraron la he-

rejía, los Concilios de Galicia, que, aunque provincial el 1.°, pues no lo fué más que de la de Braga, era tambien nacional, porque esta sola abrazaba el territorio de todo el reino, fueron convocados por el Príncipe; y los padres, al relatar esta circunstancia, le tributan grandes elogios, dando por supuesta la justicia de la prerogativa régia.

El Concilio 1.° de Braga del año 561 debió su reunion á Ariamiro; y Miron mandó reunir el 2.° en 572. Son muy notables las palabras de Lucrecio, metropolitano presidente del 1.° «*Diu est, sanctissimi fratres, quod, secundum instituta venerabilium canonum, et decreta catholicæ apostolicæ disciplinæ desiderabamus sacerdotalem internos fieri debere conventum... Nunc, igitur, quoniam obtatum nobis hujus congregationis diem gloriosissimus, atque piissimus filius noster, adspirante sibi Domino regali præcepto concessit.*» En estas frases aparece manifiesto que, aunque los obispos deseaban, hacia mucho tiempo, reunirse en Concilio, obedeciendo á los cánones, no se creyeron con derecho para realizarlo, hasta que el Príncipe los convocó. Hé aquí establecida en toda su amplitud la regalía de la Corona.

Los sínodos toledanos, á los cuales asistieron prelados tan sábios y celosos de la pura disciplina eclesiástica, como San Leandro, San Isidoro, San Eugenio y San Julian, proclamaron igualmente la piedad del Monarca que les llamaba á Concilio, admitiendo su autoridad. El 3.° dice en su primera sesion: «*Qum idem gloriossisimus princeps omnes regiminis sui Pontifices in unum convenire mandasset.*» El 4.° usa de palabras del mismo modo decisivas, las cuales, con las demás empleadas por el mayor número de ellos, seria prolijo transcribir. Está, por consiguiente, fuera de duda que la Iglesia goda sancionó, con todo el peso de su autoridad este derecho, que pertenecia á los Reyes, como protectores de los cánones, y por su suprema competencia en cuanto concierne el órden y seguridad pública.

La regalía está además robustecida con el reconocimiento, que de ella hicieron los romanos Pontífices. Celebrado el tercer Concilio constantinopolitano, 6.° ecuménico, en el año 680, sin que los obispos españoles hubiesen asistido, el Papa Leon II escribió á Ervigio, á fin de que mandase reunir sínodo general y en él se admitiese el Prosphonetico, ó sea la definicion conciliar y aclamacion de los PP., que remitia por Pedro, notario regionario, entretanto que el todo de las actas se traducia al latin.

En obrar de tal manera los Pontífices y obispos, al mismo tiempo que denotaban comprender la imposibilidad, en que la Iglesia se hallaria de celebrar con frecuencia sínodos, sin el auxilio de la autoridad temporal, adoptaban en nuestra España la disciplina vigente en todas las naciones de la Europa. Los Concilios nacionales eran asambleas estraordinarias, que dependian de circunstancias especiales, y por consiguiente necesitaban, cada vez que se celebrasen, del asentimiento y proteccion del Monarca, á diferencia de los provinciales que, como ordinarios y cuyo tiempo de reunion estaba metodizado en los cánones, eran autorizados por el Príncipe en el hecho de dar fuerza de ley en el Estado á las disposiciones eclesiásticas que los prescribian.

Y, sin embargo de lo que se acaba de manifestar, la regalía de nuestros sumos imperantes se hizo estensiva á los últimos, lo mismo que á los primeros, en contraposicion á la que era propia de otros reyes. Muchos son los Concilios provinciales, por aquellos convocados, que pudieran citarse en comprobacion de esto. Bastará hacer indicacion del toledano, reunido por Gundemaro en 610, del 7.° por Recceswinto y del 11.° por Wamba.

No se crea que, al hacerlo, usurpaba la Corona atribuciones que la Iglesia le denegase. Era tal la piedad de nuestros imperantes, tan estrecha la union de las dos potestades, y tan grande la deferencia de la Iglesia hácia ellos, que no temió someter á su voluntad la observancia de los cánones en esta importante materia. El Concilio de Mérida, de 666, consigna espresamente este derecho real, en su tit. 5.° «*Justa canonum ordinem, tempore, quo concilium per Metropolitan*

voluntatem et regiam jussionem electum fuerit agere:::» El 11.° de Toledo, despues de lamentarse de los males que afligian á las iglesias por *haberse estinguido la luz de los concilios* en 18 años, efecto de la calamidad de los tiempos, aclama restaurador de la disciplina eclesiástica á Wamba, que concedió á los obispos facultad de reunirse en sínodo provincial, determinando que lo mismo hiciesen anualmente de allí en adelante. En el cánon 15 impone la pena de excomunion á todos los de la provincia Cartaginense, que dejasen pasar el término sin reunirse, no habiendo impedimento de parte del Príncipe. Si el Concilio 11.°, al eximir de la pena á los obispos, que obedecieran la prohibicion del Monarca, no reconociese en éste la facultad de establecerla, seria inesplicable su disposicion 15, porque en ella se consideraban inocentes los que infringian los cánones y se sujetaban á un mandato ilegítimo.

Empero: la autoridad del monarca, en la convocacion no escluia la eclesiástica. Ambas se aunaban, poniéndose de acuerdo; y si á veces solamente se hace mencion de la potestad temporal, es debido á que esta era la encargada de la ejecucion. La coleccion canónica de nuestra Iglesia registra abundantes documentos, que todos los demuestran. Las palabras citadas del Concilio emeritense, el cánon 15 del Toledano 11.° á que se acaba de hacer referencia, y por último, y para abreviar, el cánon 1.° del toletano 7.°, patentizan la intervencion de la potestad eclesiástica al lado de la del Monarca.

Mas ¿cuál era esa potestad eclesiástica, que intervenia? Cuando los Concilios eran provinciales, ninguna duda fundada puede ofrecerse, porque los cánones indicados del emeritense, y el 11.° de Toledo, hablan espresamente del metropolitano; y aunque nada dijesen, supliria satisfactoriamente su silencio la disciplina general. La dificultad se presenta al investigar lo mismo acerca de los generales. Hasta el reinado de Ervigio, y el concilio 12.°, su presidencia correspondió al metropolitano más antiguo en ordenacion; desde aquel quedó adherida á la silla toletana; y si en el 5.°, 7.°, 10.° y 11.° firman como presidentes Eugenio II y III, y Quirico, obispos de la ciudad régia, no fué debido á la prerogativa de la silla; sino por ser los únicos metropolitanos concurrentes, como en el 5.°, por gozar del privilegio de la antigüedad, como en el 10.°, ó por ser el concilio tan solo de la provincia Cartaginense, como el 9.° y 11.°

Mas si el derecho de presidencia, que por los canónes correspondia al metropolitano, procedente en ordenacion, no era estensivo á la convocatoria, y por consecuencia aquella prerogativa no suministra dato cierto en la presente cuestion. Lo que parece mas probable, es, que San Leandro y San Isidoro habian sido los que con el monarca intervinieran en la reunion del 3.° y 4.° sínodos. El parentesco con Recaredo, la parte que el primero tuvo en su conversion, su santidad y ciencia, que los realzaba sobre los demás obispos españoles, y de todo el mundo católico, debieron darles una grande influencia en los negocios del Estado, y particularmente en los eclesiásticos. A la muerte de estas lumbreras de la iglesia goda, la importancia de la ciudad régia, el continuo roce de sus prelados con el monarca, las virtudes del gran San Eugenio III, que ocupó la Silla desde Chindasvinto hasta los tiempos del concilio X, que presidió, y la consideracion, que ante la Iglesia iba poco á poco adquiriendo la Sede Toletana, tal vez, dieron á sus obispos la intervencion en la convocatoria que de derecho no correspondia á otra especial iglesia.

Se debe tener presente para juzgar de la elevacion de la cátedra de Toledo sobre las demás, que ya el concilio 7.° en el cánon 6.° habia ordenado que los obispos de las iglesias vecinas residiesen alternativamente en la córte para honra de la Sede régia y consuelo del metropolitano; decreto que deja vislumbrar la sublimada posicion, que ya entonces éste gozaba. El Papa San Leon II, tambien escribió al obispo Toletano, Quirico, encargándole, al mismo tiempo que al Rey, la reunion de un concilio general, para la admision del 6.° ecuménico. No es, por lo tanto, temerario afirmar que aquel seria la única au-

toridad eclesiástica, que tendria parte en la reunion de los sínodos de la nacion.

En el concilio 12.°, cánon 6.°, y en el 13.°, cánon 9.°, se completa la supremacía de la iglesia de Toledo, concediendo á su obispo el nombramiento, con el Rey y la consagracion de los pastores de las iglesias vacantes, viéndosele desde entonces presidir los concilios generales, no por antigüedad; sino por la preeminencia de su cátedra y por el derecho de ordenacion.

Celebracion.—Nada de notable sobre esto ofrecen las actas de los concilios 1.° y 2.°, únicas en la actualidad existentes, de los anteriores á Recaredo. La disciplina vigente en la Iglesia y practicada por todos los sínodos fué la seguida en ellos, y aun no habia entonces causa fundada para modificarla. En el 3.° la intervencion de la autoridad temporal dió lugar á nuevas prácticas, que se fueron perfeccionando en los concilios sucesivos.

El cánon 4.°, del concilio 4.°, «*Formula, secundum quam, debeat sancta synodus in Dei nomine fieri*» establece una disciplina tan pura, que mereció ser incluido en el Cuerpo del derecho, y aceptado por la Iglesia universal. Las reglas, en él contenidas, se ampliaron posteriormente con las prescritas en los concilios siguientes, formando un reglamento completo, que determina con minuciosidad las más leves circunstancias de la celebracion. El Códice Vigilano, bajo el título, «*Formula qualiter concilium fiat,*» y otros documentos de su época las trasmitieron testuales, con la *via régia*, ó *exhortacion del príncipe*, que comenzó á ser formada en el concilio 4.° Puede verse testual en varias colecciones canónicas, y diccionarios canónicos, como el del abate Andrés, y el de Durand.

Reunidos los PP. en el templo, ocupado cada uno su asiento, hecha oracion y la invocacion de la gracia, leidos por un diácono los cánones relativos al concilio, y preparados los notarios para formar acta, entraba en la iglesia el Rey, seguido de los magnates de su córte: y despues de orar postrado ante el altar, hacia una exhortacion á los PP., encomendándose á sus oraciones, y les manifestaba los puntos de que creia conducente se ocuparan, entregando al presidente la memoria, ó *tomo régio*, que los contenia: volvia á hacer oracion y se retiraba de la iglesia.

Esto era lo frecuente; pero no á todos los concilios asistió el Monarca. Las actas conocidas dan razon de esta circunstancia, tan solo en el 3.°, 4.°, 5.° y 8.°

La *vía régia*, inserta en el códice vigilano, es una tierna alocucion que los PP. hacian al príncipe, para que gobernase á los pueblos en justicia y observase los preceptos evangélicos. El P. Florez cree con mucho fundamento, si se ha de atender á las actas, que se compuso, ó á lo menos se perfeccionó en el concilio 4.° Por ella se sabe que los reyes godos, desde Recaredo, eran ungidos al ascender al sólio, ceremonia no introducida aun en aquel tiempo en ninguno de los reinos de Europa.

Tambien se encuentran firmas de condes y varones ilustres en las actas de los concilios 8.°, 9.°, 12.°, 13.°, 15.° y 16.°

Ahora bien ¿quiénes tenian voto decisivo? Supérfluo es decir, que los obispos, como jueces originarios, eran los que con autoridad emitian sus sufragios. Esta es una verdad palmaria que ninguno ha pretendido poner en duda. Hasta el concilio 8.° es probable que los presbíteros, asistentes por eleccion del sínodo, no contribuyeran con su voto á las decisiones. A pesar de la disciplina, admitida entonces generalmente, segun muchos opinan, motivos hay para afirmar que en España no gozaban de esta prerogativa. El concilio 2.° de Braga presenta á los obispos decidiendo los puntos de que se trató en su seno, y á los presbíteros como asistentes; pero sin tomar parte en la discusion. El concilio 4.° de Toledo, no reconociéndoles la asistencia por derecho propio, concede á los obispos la facultad de permitirla á los que eligiesen. Y, finalmente, en las suscripciones no están sus nombres: falta que no se daria, en el supuesto de que hubiesen contribuido á la formacion de los cánones. No es bastante para probar lo contrario el que tenian silla en el concilio los elegidos; esto era un privilegio, otorgado en conformidad del espíritu de la disciplina pri-

mitiva y por respeto al órden sacerdotal. Mas desde el 8.°, los que por su cualidad de abades ocupaban un lugar en la reunion, gozaron de la prerogativa del sufragio. Sus nombres aparecen desde entonces en las suscripciones, despues de las de los obispos. La fórmula que emplean es del todo igual á la de éstos, y aun en algunos concilios tiene un carácter decisivo mas determinado. En el 14.°, en que los obispos ponen simplemente su nombre y su iglesia, los abades y vicarios usan de las siguientes palabras: «*Hæc gesta synodica, á nobis definita, suscripsi.*» No cabe, por lo tanto, duda sobre su voto deliberativo.

Algunos autores hay que quieren negárselo á los vicarios, hasta el sínodo 7.° Esta opinion no tiene sombra alguna de apoyo. En todas las actas, en que los PP. añaden al firmarlas alguna fórmula á su nombre, de la misma se valen aquellos, á escepcion de las del concilio 14.° que se acaba de citar, y las cuales, como se ha visto, suministrarian una prueba todavia mas concluyente, si por ventura fuera necesaria. El solo raciocinio, sin el auxilio de ningun documento, rechaza como absurda tal opinion. Si en virtud del derecho de representacion no tuviesen voto decisivo, tampoco podrian asistir al sínodo, puesto que por su propio órden no estaban adornados, á lo menos en España, de esta prerogativa. Por consiguiente, los PP., admitiéndoles en nombre de los ausentes, tuvieron igualmente que reconocerles la facultad del sufragio de que los poderdantes gozaban; si bien por la fuerza de los principios hay que reconocer que pudieron los concilios ordenar lo contrario, como se verificó luego en el de Trento.

Los grandes palatinos no contribuian con sus votos á los acuerdos de la asamblea. En cuanto á los negocios eclesiásticos es evidente que los obispos siempre; y los vicarios, y los abades tenian, en sus casos, la autoridad esclusiva. La disciplina de toda la Iglesia, que arranca del Concilio apostólico acerca de los *legales* en Jerusalen, ha negado siempre á los legos estas atribuciones, y conformándose á ella el emperador Valentiniano, respondió á los obispos, que le pedian la restauracion de la fé Nicena «*sibi, qui unus ex laicorum numero erat, non licere se ejusmodi negotiis interponere.*» El concilio toletano 17.°, en el cánon 1.° citado, les prohibe la entrada en los tres primeros dias, en que se trataba de la fé y se discutian los demás negocios eclesiásticos. Y si no les era permitido asistir ¿cómo habian de conocer? ¿cómo habian de fallar?

Mas, sobre los asuntos civiles, sometidos al exámen de la asamblea, puede aun decirse muy fundadamente que no tenian un voto igual al de los obispos. Receswinto, en el *tomo régio*, que entregó á los PP. del 8.°, primero á que los magnates asistieron, y cuyas actas firmaron, les dice: «*Vos, autem, illustres vivos... obtestor... ut ad tantæ veritatis, ac discretionis justissimæ formulam, ita animos dirigitatis, ut nihil á consensu patrum, sanctorumque virorum aliorum mentis ducentes obtutum, quidquid inocentiæ vicinum, quidquid justitiæ proximum, quidquid á pietate non alienum, vel soli Deo cognoveritis existere placitum, instanter, modeste, et cum omni dignemini intentione complere.*» De frases igualmente muy significativas se vale Ervigio, en el tomo del concilio 12.°

Bastan estos dos pasages, sin necesidad de otros, que pudieran aducirse, para formar idea de las funciones de los grandes en los concilios. Elegidos por el príncipe para que asistiesen á la asamblea episcopal, su objeto en ella estaba circunscrito á informar, quizá, á los obispos, sobre el estado de las provincias, que gobernaban, y de los casos que requerian una resolucion legal, á oir los consejos y discusiones de los PP. tan superiores á ellos en ciencia y virtudes, y que formaban el único cuerpo ilustrado de la nacion, llevando unido á su sagrado carácter en aquella sociedad, altamente religiosa, una incontrastable influencia, á concurrir, en fin, á la reunion para penetrarse del espíritu de las decisiones, que se tomasen, y como á una escuela práctica, en que pudiesen aprender las reglas de templanza, de caridad y de buen gobierno, con que habian de dirigir á los habitantes de las provincias. En una palabra: los grandes

dignatarios y duques de las provincias concurrian á las sesiones de los concilios generales con idéntico fin, al que el cánon 18 del 3.° espresa, cuando impone, de acuerdo con el Rey, á los jueces inferiores la obligacion de asistir á los provinciales.

Cierto es que firman las actas de seis sínodos, únicos á que, ya en mayor, ya en menor número, asistieron. Mas, de esto no se puede inferir su voto deliberativo. Aquellas inscripciones tienen seguramente por objeto dar más realce, más prestigio civil á los acuerdos conciliares, y ellas mismas ofrecen una fuerte prueba de la opinion que sostenemos. En el concilio 13.°, en que los PP., abades y vicarios no usan de fórmula alguna en la suscricion, los grandes añaden á su nombre la siguiente: «*hæc instituta, ubi inter fui, annuens subscripsi.*» La palabra *annuens* demuestra bien patentemente el carácter de su intervencion. Se concretaban á aceptar las disposiciones del concilio, á conformarse con ellas, y, en prueba de ello, las suscribian. Nada más puede concedérseles á no querer estender la soñada prerogativa del sufragio á los negocios de fé, estension que ningun católico admitirá.

Terminado el concilio, el príncipe confirmaba las resoluciones adoptadas, cumpliendo con lo que, por lo general, acostumbraba á prometer en el *tomo régio*. Esta confirmacion surtia dos efectos, segun la naturaleza de las decisiones. Las que versaban sobre asuntos eclesiásticos, adquirian por ella la fuerza de ley civil, convirtiéndose de este modo en *nomo-cánones*, y desde entonces obligaban á los súbditos, no solamente bajo las penas canónicas señaladas, sino bajo las civiles, sancionadas por el Monarca. Y si el sínodo los habia garantido con alguna de esta clase, adquiria la fuerza, que por su orígen no tenia. Las que versaban sobre asuntos temporales, eran elevadas á la categoría de ley, en virtud del edicto confirmatorio, y de esta manera, á la autoridad moral de la Iglesia, se unia la autoridad legal del príncipe. Los concilios para tomar resoluciones de esta índole, no tenian otras atribuciones que las concedidas en cada caso por el Rey.

No se conservan las leyes confirmatorias de todos los concilios toledanos. La coleccion canónica solamente contiene las del 3.°, 5.°, 12.°, 13.°, 15.°, 16.° y 17.°, no pudiendo la falta de las otras dar fundamento para negar su existencia oportuna, puesto que los PP., en algunos de los no contados, como en el 4.°, dicen terminantemente, que el Rey confirmó los cánones que formaran.

Naturaleza de los concilios de Toledo. Al determinar la naturaleza de los concilios toledanos, celebrados durante la monarquía goda desde Recaredo, los autores se han dividido en dos opuestas opiniones. Unos, entre los que se cuentan Ambrosio de Morales, Saavedra, Villadiego, el célebre canonista francés Tomasino, y muy especialmente Martinez Marina, se esfuerzan por sostener que fueron *Córtes-concilios*, ó sea *Estados generales del reino*, con sus tres brazos: alto clero, nobleza y pueblo, poniendo en su seno el orígen de nuestras célebres Córtes de la edad media. Otros, como el C. M. fray Enrique Florez y el mayor número de los escritores modernos, no ven en ellos más que unas asambleas eclesiásticas, celebradas con arreglo á la disciplina canónica, las cuales, *jure proprio*, tenian concretadas sus atribuciones á las que por los cánones corresponden á esta clase de juntas.

Los primeros creen hallar en las actas de los concilios circunstancias, á su parecer inconciliables con la última opinion, y que únicamente tienen una esplicacion satisfactoria en la primera hipótesis.

Los obispos no eran los únicos jueces en aquellas asambleas. Las suscripciones conciliares están demostrando que tambien los grandes participaban de este derecho. Además, algunos cánones indican el consentimiento del pueblo en la adopcion de ciertas disposiciones. Y no habiendo razon de diferencia que exigiese en unas, y no en otras, esta circunstancia, lógico parece extender á todas lo que las actas dicen tan sólo de algunas.

Por otra parte; las trascendentales resoluciones, eminentemente civiles y políticas, que se registran en las actas, como adoptadas en

los concilios, parece que no deben dejar lugar á duda sobre su carácter. Los obispos, en su calidad de pastores de la Iglesia, carecian de atribuciones temporales. Por efecto de su mision tenian que circunscribirse á los negocios eclesiásticos. Si pues se ve que, lejos de hacerlo, legislan sobre puntos que afectan la constitucion fundamental de la sociedad goda, y que son del todo ajenos á los intereses que estaban llamados á defender, como la eleccion del Monarca, su inviolabilidad, las garantías políticas de los ciudadanos, y otros radicalmente civiles, como la determinacion de las relaciones entre los señores y los esclavos, la personalidad civil de los judíos, la organizacion judicial, etc.; si se observa que en las asambleas, en que especialmente se discuten negocios de esta clase, están los obispos acompañados de los grandes, á diferencia de otras dedicadas casi en su totalidad á negocios de disciplina, en las cuales éstos no se hallan; si, por último, se nota que las mas vitales decisiones políticas son tomadas consintiéndolo y aprobándolas el pueblo, parece se llega á adquirir el convencimiento de que los obispos en esos concilios no se reunian en nombre de la Iglesia; sino del Estado; no representaban los intereses de aquella, sino los de éste; no concurrian por su carácter de jefes de la Iglesia; sino por el político, que su alta posesion en la sociedad goda llevaba esencialmente unido.

Agréguese á lo dicho que los godos, como los demás pueblos germánicos, nunca concedieron á sus reyes una autoridad absoluta. Los grandes y el pueblo celebraban *concilia*, como dice Tácito, en que se decidian los negocios mas importantes. Esta costumbre no desapareció al abandonar aquellos pueblos sus primitivos bosques. Todas las naciones de Occidente, que de ellos procedieron, la conservaron mas ó menos modificada, siendo de ello una brillante prueba los campos de Marzo y Mayo de los francos. Los godos no tuvieron, desde la conversion de Recaredo, otras reuniones nacionales que los concilios. A lo menos los documentos que se conservan de aquella edad guardan silencio sobre su existencia; y razonablemente debemos suponer que su profundo amor á la libertad no permitirian que cayesen en desuso. Y no habiendo otras asambleas que las conciliares, y discutiéndose en éstas los mismos negocios que en las primeras, ¿no es lógico deducir que las reuniones de Toledo eran las legítimas sucesoras de las primitivas, aunque con las modificaciones introducidas por el tiempo y civilizacion?

Ni se diga que los elementos constitutivos de los concilios eran diversos de los que entraban en aquellas juntas nacionales: porque, además de los nobles y del pueblo que tomaban parte, los sacerdotes gozaban igualmente de una poderosa influencia en su seno; eran los que administraban la justicia criminal y los únicos jueces que dictaban la sentencia en las causas capitales, estando tambien á ellos encomendada la conservacion del órden en la reunion. Dedúzcase de estos datos la poderosa intervencion que en ellas tendrian. Y si á estas consideraciones se añaden las que se desprenden de la conversion de Recaredo y de las circunstancias en que, por efecto de ella, se encontró el pueblo godo, no será difícil esplicar el predominio, aunque no esclusivo, de los obispos sobre los grandes y el pueblo en los concilios.

Tales son las razones alegadas por los defensores de la primera opinion. Y, sin embargo, no es hoy admitida por lo comun; estando por el contrario, cuasi, ó sin cuasi, fuera de duda la segunda, sobre lo cual en este, y otros artículos análogos, tenemos indicada nuestra opinion contraria.

Para que los concilios de Toledo fuesen Córtes del reino, era preciso: 1.°, que estuviesen formados por el clero, la nobleza y el pueblo: 2.° que estos órdenes asistiesen por derecho propio; y 3.°, que tuviesen y ejerciesen, igualmente por derecho propio, mas ó menos, pero siempre algunas atribuciones de gobierno. Y no obstante, en ellos estas circunstancias se buscaran en vano.

El cánon 4.° del concilio 4.°, que prefija el modo de celebrarlos, los presenta como verdaderas asambleas eclesiásticas, y nada dice de la asistencia de las clases noble y plebeya, limitándose á facultar á los obispos para que

admitan los legos, cuya asistencia juzgaren conveniente. Esta disposicion fué cumplida en los concilios 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.°, porque las actas y suscripciones son esclusivamente debidas á los obispos y sus vicarios. En el 8.° es cierto que hubo grandes, pero no se observa ya lo mismo en todos los demás que le siguieron, siendo por otra parte su número muy reducido comparado con el de los obispos, vicarios y abades. Al 8.° concilio asistieron 4 metropolitanos, 47 obispos, 11 abades, 11 vicarios de aquellos, y tan solo 17 grandes: al 9.° 1 metropolitano, 15 obispos, 8 abades, 1 vicario, y únicamente 4 grandes: al 10.° ninguno de estos concurrió: lo mismo al 11.°: en el 12.° tomaron parte 4 metropolitanos, 30 obispos, 4 abades, 3 vicarios y 15 grandes: el 13.° aparece formado por 4 metropolitanos, 44 obispos, 9 abades, 26 vicarios y 26 grandes; ninguno de los últimos se vió en las sesiones del 14.°: en el 15.° hubo 5 metropolitanos, 56 obispos, 5 vicarios, 11 abades y 17 condes: y en el 16.° firman 5 metropolitanos, 54 obispos, 5 abades, 3 vicarios y 16 condes. No existen las suscripciones del 17.°, ni las actas del 18.°

De suerte que de los 16 concilios celebrados desde Recaredo, únicamente se da la asistencia de los oficiales palatinos en 6, se ignora en 2, y consta la falta en 8. Aparece igualmente en aquellos, á que concurrieron, un número muy inferior á los miembros del órden eclesiástico.

En cuanto al pueblo puede asegurarse con toda certeza, á vista del cánon 4.° del concilio 4.° y á las actas de los demás, que nunca tomó parte en las sesiones de aquellas asambleas. Falta por consiguiente la primera condicion.

Consecuencia forzosa de esto es la no realizacion de la segunda. No podian asistir por derecho propio los que, ni por delegacion concurrieron. Pero aun respecto á los grandes, en los sínodos, que suscriben, puede asegurarse, como antes ya queda demostrado, que lo hicieron por concesion del Monarca y aquiescencia de los obispos. Resulta de los tomos régios, entregados á los 8.°, 12.°, 13.° y 16.°, que los varones palatinos asistian por voluntad y designacion del Rey: «*quos, interesse huic sanctæ synodo delegit nostra sublimitas.*» En el tomo del 15.° Egica dirige esclusivamente la palabra á los PP. como si los magnates no estuvieran tambien presentes, y tal vez se leeria lo mismo en el del 16.°, y mas que faltan, si se conservasen. Debiendo, pues, la asistencia á la benigna eleccion del Monarca, claro es, que no tenian por su categoría este derecho. Y en efecto ¿es posible que, si se creyesen por sí mismos autorizados para tomar parte en estas asambleas, no hubieran reclamado en el considerable número de ellas, en que no fueron llamados? Las clases nunca renuncian tan humildemente y de buen grado á sus prerogativas. Nada se dirá del pueblo, porque ya se ha probado que á ningun concilio fué admitido, y si asistió alguna vez á la conclusion, era para aplaudir, como testimonio de respeto.

No se verificó tampoco la 3.ª condicion. Los concilios de Toledo, *jure proprio*, no estendieron jamás sus atribuciones fuera del círculo trazado por la disciplina eclesiástica, y si aparecen entre sus cánones importantísimas disposiciones civiles y políticas, son efecto de la delegacion especial, que á cada uno hacian los Monarcas. Recaredo, en el tomo que entregó á los PP. del 3.°, emplea las siguientes frases: «*de cætero autem, proinhibendis insolentium moribus, mea vobis consentiente clementia, sententiis terminate districtioribus, et firmiori disciplina, quæ facienda non sunt, prohibite, et ea, quæ fieri debent, inmobili constitutione firmate.*» Si por la clemencia del monarca, que lo consentia, los concilios adoptaban disposiciones temporales, claro es que sin ella no podrian hacerlo. Parecidas frases se leen en todos los demás tomos régios, que actualmente existen. Los PP. lo entendian tambien así; por cuya razon, cuando tomaban algun acuerdo, relativo á la disciplina eclesiástica, usaban de ordinario de esta fórmula: «*præcepit sancta synodus: constituit sancta synodus:*» y aun en el cánon 59 del 4.°, y en otros más, se añade, para denotar la propia y esclusiva jurisdiccion episcopal, «*consulto piissimo principe.*» Pero cuando resolvian los negocios tem-

porales, reconocian que, al hacerlo, obraban como delegados del rey, «*Consentiente domino nostro Rege:*» «*annuente domino nostro Rege.*»

Respectivamente á los grandes en los concilios á que asistieron, ya se ha demostrado en el párrafo 3.° que no tenian voto deliberativo.

Los sostenedores de la opinion contraria ven en algunos cánones, que mencionan, la aprobacion del pueblo, una prueba de la necesidad que habia de su consentimiento, é intervencion en las leyes conciliares. En efecto: se lee en el cánon 75 del 4.° lo siguiente: «*si placet omnibus, qui adestis, hæc tertio, reiterata sententia vestræ vocis, eam consensu firmate. Ab universo clero, vel populo dictum est: qui contra hanc vestram definitionem præsumpserit, anhatema... sit.*» En el propio cánon se halla otro ejemplo de lo mismo, y en el 8.° y 16.° sínodos, al hablar de los infieles á la pátria y al Rey, igualmente interviene el pueblo. Pero es irracional deducir de esto lo que se ha pretendido. Estas aclamaciones no fueron peculiares de los concilios de Toledo: en otras diferentes naciones se verificaban tambien, aun en negocios puramente eclesiásticos, como un testimonio del respeto que la plebe tributaba á los obispos y á sus acuerdos. Las palabras que se acaban de copiar, tomadas del concilio 4.°, dan á entender lo ageno que el mismo pueblo se creia á las decisiones, tomadas en la asamblea: no dicen «*qui contra hanc nostram definitionem præsumpserit*;» sino «*qui contra hanc vestram definitionem præsumpserit.*»

Además, consta del mismo concilio 4.° que á sus sesiones no asistió el pueblo, porque en el cánon 4.° mandó, que únicamente tuviesen entrada los legos, «*qui electione concilii interesse mesuerint,*» y él, que dictaba esta resolucion, no habia de ser el primero á infringirla. La espresada aclamacion se verificó el último dia, en que, segun dice el documento conservado en el códice de Vigila, y analizado en el párrafo anterior, se leyeron las actas en público. Y, para no omitir razon alguna, ¿pueden representar legítimamente á todo el pueblo godo algunas docenas de personas, vecinas de Toledo, que concurririan á la iglesia el dia final de la asamblea?

Tan solo se encuentran en los códices latinos los cuatro ejemplos de aclamacion sobredichos, si bien en los romanceados hay alguno mas; y ¿qué desproporcion no resalta entre tan escaso número y la multitud de negocios temporales, del mas trascendental interés, civil y político, decididos en las asambleas toledanas, en las cuales no se hace mencion de tal circunstancia?

Por último: no pueden ser consideradas estas como la continuacion de las asambleas, que los godos celebrarian en su patria originaria. Aun concediendo desde luego que este pueblo sea procedente de los bosques de la Germania, y no de las llanuras de la Escitia, en cuyo caso faltaria el supuesto, no es exacto que desde Recaredo no hubiese mas reuniones que los concilios de la capital del reino. Por estos consta que habia juntas de los magnates y obispos para la eleccion del Monarca, y estos no eran los concilios, porque ninguno fué en ellos elegido. Algunas leyes hay en el Fuero Juzgo, que se dicen formadas *coram universis Dei sacerdotibus sanctis, annatisque officiis palatinis*, y que no se encuentran en las actas conciliares: habia, por consiguiente, asambleas de estos diversas.

Mas, aunque así no fuese, no puede deducirse de tan débil razon, que los concilios tuviesen el carácter de las juntas primitivas, despues del exámen que de ellos se acaba de hacer.

Mas, si no eran córtes-concilios, ¿no serán, por lo menos, *concilios mistos*? Esta es ya otra cuestion, que hay que resolver afirmativamente; pero segun se espresa al fin del artículo genérico **CONCILIO**. Véase.

Algunas disposiciones notables. Muchas serian las que habian de indicarse, y así es preciso que fuera, cuando en el largo período de 300 años, que abarcan los 18 concilios, puede decirse, que, aunque por régia delegacion, ellos casi legislaron á la par con el Monarca, siendo además por todos reconocida y encomiada la suficiencia de estos concilios; pero la índole y el método de la ENCICLOPEDIA

no permiten descender á tantos pormenores, aunque importantes, y habrán de verse en su testo, en las colecciones y desde luego en la de cánones de la Iglesia española.

Convocado el concilio 3.° por Recaredo, prevaleció, como regalía, la régia convocatoria para todos los concilios nacionales, sin protesta de los PP., que, por el contrario mostraban gratitud al Rey, y recibian con acatamiento y buena voluntad de su mano el tomo régio, expresion de su deseo y de las necesidades del Estado.

Prevaleció tambien la nominacion de los obispos por el Monarca, fundamento, sobre el cual, luego ha sido concordada.

En el concilio 2.° se estableció la base de los seminarios, ordenando que los jóvenes que se dedicasen á la carrera eclesiástica, se educasen reunidos, bajo la inspeccion del obispo.

En él se impuso tambien la continencia de los sacerdotes, lo cual se reiteró en el concilio 8.°

En el Concilio 4.° se estableció que las cosas eclesiásticas no prescribieran hasta los 30 años; ordenándose en el 9.° que no empezarán á correr hasta la muerte del sacerdote que enagenó, ó último poseedor.

En el 11.°: que todos los años se celebrase concilio provincial, contando con el beneplácito del soberano, desde cuyo tiempo viene prevaleciendo en España, tambien en este punto, la prerogativa de convocatoria.

En el 12.°: que los clérigos no puedan celebrar más que una misa al dia, salvo caso de inevitable necesidad los párrocos rurales. (El Papa Alejandro II en 1065 las amplió en este caso hasta tres.)

Que el arzobispo de Toledo pudiera consagrar á los obispos que nombrara el Rey, y de ahí, hecho ya independiente de la provincia de Cartagena, por declaracion de los concilios con el Rey, su *primacía*, y el presidir los concilios nacionales.

A peticion de Ervigio se estendió el asilo eclesiástico á 30 pasos de las iglesias.

El concilio 13.° ordenó que no se pronunciase excomunion contra el clérigo, que de una providencia, que estimase perjudicial, apelase al metropolitano, ó del metropolitano al Rey, en lo que parece verse un recurso de fuerza y proteccion.

Ultimamente, la importancia de los cánones de estos concilios fué tal, que no sólo se les ve reflejar en la política y en la legislacion goda, y por tanto en su admirable *Fuero Juzgo*; sino que de ellas, ó testualmente, ó en parte, fueron trasladados al Cuerpo del Derecho canónico, 9 cánones del concilio 1.°: 1 del 2.°: 10 del 3.°: 56 del 4.°: 5 del 6.°: 2 del 7.°: 2 del 8.°: 8 del 9.°: 4 del 10.°: 6 del 11.°: 5 del 12.°: 1 del 13.°: 2 del 16.°: y 1 del 18.° Véase **CONCILIO**.

CONCILIOS DE ULTRAMAR.

De cualquier clase de concilios que se trate, dos cosas ocurren y han de tomarse en cuenta en todos ellos para su celebracion: las distancias, los gastos y dificultades ya especiales, ya generales, respecto de los convocados, y el conocimiento, anuencia é intervencion de la suprema autoridad secular, á cuyo cargo están la paz pública y el órden. Ambas circunstancias resaltan en cuanto á los concilios de Ultramar, y eso con Monarcas tan católicos como Felipe II, Felipe III y Felipe IV.

No se pone en duda que, si lo que sucederá apenas, hubiese de celebrarse en la península concilio nacional, los obispos de Ultramar habrian de venir, salvas, como siempre, las escepciones de imposibilidad, y de evidente conveniencia de la Iglesia. Con mayoría de razon habrán de concurrir á los concilios *ecuménicos*, como hoy se hallan en el Concilio Vaticano, que actualmente se celebra.

Trátanse solo, pues, de concilios provinciales y episcopales ó diocesanos. De unos y otros se han celebrado en los dominios españoles de Ultramar, y unos y otros se celebran ya tan rara vez, y eso hace mucho tiempo, que parece haber caido en desuso, como en el resto de las regiones católicas, habiendo llegado las cosas á punto de haberse concordado entre la Santa Sede, y una nacion, eminentemente católica, como hasta entonces lo habia sido España, que el Gobierno se comprometia *á no oponer óbice* á la celebracion de concilios diocesanos, y que sobre la de concilios provinciales, prometia *ponerse de*

acuerdo con la Santa Sede. (Art. 19 del Convenio con Su Santidad, de 25 de Agosto de 1859.)

Hé aquí ahora nuestras leyes de Indias, sobre ambas especies de concilios en aquellas regiones.

Concilios provinciales. Fueron varios los celebrados en Lima y Méjico. Es notable sobre su celebracion la ley 1.ª, tít. 8.º, lib. 1.º Recop. de Indias. «A instancia y esplicacion nuestra, dice, y en atencion á la grande distancia, que hay en las Indias de unos obispados á otros, y de las iglesias catedrales á sus metropolitanas, y costas, que se seguirian á los obispos, si se congregasen á celebrar concilios provinciales tan contínuamente, y á que no estuvieren mucho tiempo fuera de sus iglesias, la Santidad de Paulo V, por breve, dado en Roma, á siete de Diciembre de el año de mil y seiscientos y diez, concedió que se pudiesen diferir y celebrar *de doce en doce años*, si la Santa Sede apostólica no ordenare y mandare otra cosa; ó á los arzobispos ú obispos no les pareciere que hay necesidad de celebrarlos dentro de mas breve término, no obstante lo determinado hasta el dia de la data. Rogamos y encargamos á los prelados que, guardando lo que está concedido y permitido por el dicho breve, no habiendo precisa necesidad de congregarse los concilios, sobresean en su convocacion el tiempo, que les pareciere que lo pueden hacer; y, cuando se resolvieren á convocarlos, sea *dándonos primero cuenta para que les advirtamos lo que fuere conveniente*, y estando confirmado y ejecutado lo que por último antecedente se hubiere determinado, para cuya ejecucion y cumplimiento bastará que los prelados celebren sus sínodos particulares, que avisen de lo que determinaron.»

Posteriormente, y en vista de esposiciones elevadas sobre ceremonial, asiento del virey, y otros pormenores, por la Audiencia, los PP. del concilio 4.º provincial de Méjico, cabildo eclesiástico y asistente real, se espidió la prolija y conocida Real cédula de 8 de Octubre de 1772, proveyendo á todo y ordenando además que *no se lean en las iglesias las actas de estos concilios, hasta no estar aprobados* en forma, esto es, por S. M., oido entónces el Consejo de Indias, y en su caso por la Santa Sede.

Antes de esto habia ordenado tambien que los vireyes, presidentes y gobernadores, cada uno en su distrito, asistan al concilio provincial representando á S. M., proponiendo en su real nombre cuanto crean útil á la Iglesia y al Estado; sin permitir, empero, que nada se ejecute sin dar cuenta á S. M. y recaido su aprobacion. (Recopilacion, leyes 1 y 6 id.)

Publicado el Concilio de Trento, se celebró concilio provincial en Méjico y Lima, adoptando escelentes disposiciones sobre reforma del clero, enseñanza cristiana de los indios, y otros puntos importantes. Y vistas las actas en el Consejo de Indias, y aprobadas por Su Santidad, se mandó á los vireyes cumplirlas y hacerlas ejecutar con toda eficacia, dispensando todo el apoyo y favor posible. (Ley 7 id. id.)

Se mandó, por último, que los concilios provinciales ordenen y hagan formalizar aranceles de los derechos y emolumentos que debe percibir el clero por *pié de altar*, y aun del estipendio de las misas que les encarguen; y que los vireyes y autoridades reclamen lo conveniente sobre ello, al tenor de lo que se ordena en la ley 2.ª (Ley 8 id. id.)

Concilios sinodales. Estos han ofrecido siempre menos dificultad, y vemos en el citado convenio pontificio de 1859, que el Gobierno se compromete á permitirlos, siempre que los obispos los crean necesarios. El Concilio de Trento los recomendó especialmente: y las leyes de Indias los mandan celebrar anualmente, encargando á los vireyes y gobernadores que así lo inculquen á los obispos (ley 3.ª id. id.): y á la inversa de lo que se dispone respecto de concilios provinciales, se mandó que los acuerdos de los sinodales puedan ejecutarse con sola la aprocion del virey y autoridades superiores respectivas.

Encárgase, por último, á los arzobispos y obispos, que cuando celebren concilios sinodales, dispensen el mejor tratamiento á los clérigos y religiosos que concurran, y que les

permitan cuanta libertad necesiten para esponer y votar lo que estimen oportuno. (Ley 5.ª, id., id.)

CÓNCLAVE. Espresa reclusion, encerramiento, y significa el conjunto de Cardenales de la Iglesia romana, constituidos en clausura absoluta, para elegir Papa, y hasta que le eligen. Significa tambien el local en que están reunidos.

El Cónclave, y la eleccion de Papa, se ligan de tal manera, que podrian tratarse en un mismo artículo. Pero el órden de la Enciclopedia no lo permite, y así consignaremos en el presente lo mas indispensable sobre Cónclave, reservando la ampliacion para los de Papa y su eleccion y coronacion.

Sabido es que en los primeros siglos de la Iglesia la eleccion de Pontífice, como la de los obispos, se hacia por el pueblo y el clero, despues de San Silvestre, que fué elegido por el propio San Pedro: y no nos son menos sabidas las escisiones y aun turbulencias, á que la eleccion por la muchedumbre dió lugar: por lo cual, y despues de un ensayo de haberse cometido á solo el Emperador, como espondremos en su artículo, Alejandro III, en 1179, en el Concilio 3.º de Letran, 11 de los ecuménicos, trasladó la eleccion á solo los Cardenales de la Iglesia romana.

Hemos indicado en su artículo, que estos fueron organizados en colegio, el cual llegó á componerse de 70 Cardenales, como ha continuado hasta hoy. Lo árduo de la cuestion y lo considerable todavía del número, hizo temer la unanimidad; y el propio Concilio estableció que dos terceras partes de votos constituian Papa. (Cap. 6 de *Election.*)

Pero no se habian resuelto todas las dificultades. Esparcidos los Cardenales en diversos Estados católicos, se ve bien que no todos se hallarian reunidos á la muerte del Papa, ni era cosa del momento esa reunion; mientras, por otra parte, no convenia prolongar la borfandad de la Iglesia. La necesidad y la conveniencia autorizaron la reunion del Colegio con los Cardenales que se hallasen presentes, y los que en un breve término, que despues hubo de hacerse taxativo, como veremos, concurriesen.

Desde luego empezó á practicarse, que el Colegio se reuniese en el punto en que habia fallecido el Pontífice.

Con la exclusion del clero y el pueblo en la eleccion, se habian evitado ciertamente las escisiones é inconvenientes de la muchedumbre; pero no se habia despojado á la cuestion misma de su gravedad, aun de conciencia, que hacia difícil la concordia. Así sucedió, que muerto el Papa Clemente IV, en Vitervo, en 1268, y reunidos allí los Cardenales, trascurrieron dos años, sin que pudieran ponerse de acuerdo; y ya iban á separarse, aplazando la eleccion, cuando San Buenaventura, individuo del Sacro Colegio, persuadió á las autoridades y vecinos de la ciudad, que á todo trance detuvieran á los Cardenales, hasta que hicieran eleccion, como así se verificó; y aquí se deja sentir, aunque un tanto violenta en sí, la necesidad del Cónclave, que no tardó en autorizarse legalmente: es decir, para que el aburrimiento y las dificultades no hagan retirarse á los Cardenales, sin realizar eleccion, que se encierren en clausura absoluta, y permanezcan encerrados hasta hacer eleccion.

Y en efecto: en 1274, Gregorio X, en el Concilio general de Leon estableció el Cónclave, con prescripciones tan estrictas, que revelan bien como se comprendió la necesidad, y muchas de las cuales, se observan todavía. Segun la constitucion del caso, que es la primera de las del Concilio, el Sacro Colegio debia reunirse luego, en el punto y palacio en que hubiera muerto el Papa; no esperando más que seis dias por los ausentes: pasado este término, los Cardenales presentes, llevando cada uno un sólo familiar, clérigo ó lego, se constituian en rigorosa clausura. Cerradas todas las salidas, salvo una, que estaria guardada, nadie seria recibido por los Cardenales, ni podria hablarles, ni aun en secreto, salvo sobre la eleccion, y eso con el consentimiento de todos. No se les podria de otro modo enviar recado, ni escrito, todo bajo *excomunion*, *ipso facto*. El alimento se serviria por una ventana, ó torno, por el que no pudiera entrarse. Si á los tres dias no habian elegido Papa, se disminuiria

gradualmente el alimento, hasta quedar reducido á sólo pan y agua; y todavía para estrechar á la eleccion, durante ella, los Cardenales no recibirian renta, ni emolumentos de la Cámara apostólica ó de otras rentas de la Iglesia. Sólo por enfermedad podia salir algun Cardenal: restablecido, podia volver á entrar, *re integra*; permitiéndolo el estado de la eleccion, y lo mismo algun Cardenal llegado de nuevo, dentro de los diez dias de constituido el Cónclave. Los magistrados de la ciudad harán observar todo lo dicho, sin esceder, pena de *excomunion* y demás eclesiásticas. Los Cardenales no se coligarán, ni harán entre sí convenio, ni compromiso alguno sobre la eleccion. Durante ella, en fin, se harán rogativas públicas en toda la cristiandad. (Cap. *Ubi periculum, de electione, número* 6.)

En 1312, Clemente V confirmó estas disposiciones en el Concilio general de Viena, añadiendo, que cuando el Papa falleciese fuera de la ciudad de Roma, se reuniese el Cónclave, no precisamente en el lugar del fallecimiento; sino en el de la diócesis, en que estuviese el tribunal de justicia y la espedicion de consultas. Si los Cardenales se separasen ó tratasen de separarse, sin haber hecho eleccion, los magistrados emplearán su autoridad para que aquella se verifique al tenor de la constitucion del Concilio de Leon. (Clement., 2.°, de *Electione*.)

Han confirmado, con ligeras modificaciones y adiciones, las disposiciones anteriores, Clemente IX, por su Const. *Cariissimus*, de 1529; Páulo IV, *Cum secundum*, en 1554: Pío IV, *In eligendo*, 1552: Gregorio XV, *Æterni*, de 1621: y Urbano VIII por su Bula *Ad romanum*, de 1625. Por ellas se prohiben las apuestas sobre eleccion de Papa, pena de *excomunion* y de privacion de beneficio eclesiástico, en su caso. Asimismo y bajo las penas eclesiásticas, la violacion de la clausura y de las reglas establecidas por el Concilio de Leon. Modifican, sin embargo, el rigor en la alimentacion y se auxiliará á los Cardenales y conclavistas, con una asignacion adecuada. Otorgan, en fin, el derecho de sufragio á los nuevos Cardenales, que aun no han recibido las insignias del cardenalato: *nec insignia cardinalatus, neque os clausum; et si clausum, nondum apertum*; salvo que el nuevo Cardenal no sea aun presbítero, y aun en este caso, pueden dispensar préviamente los Pontífices.

Con el tiempo prevaleció la costumbre de que el Cónclave se reuna en Roma; aunque el Papa haya muerto en otro punto; y no siendo así, sino de costumbre, las circunstancias y la conveniencia podrán aconsejar en un caso dado, que el Cónclave se reuna en otro punto.

Hoy la práctica es, que á los *diez dias* de muerto el Pontífice, se reunan en Cónclave todos los Cardenales, que se encuentren en Roma y que pueden concurrir, en una de las galerías del Vaticano, preparada al efecto. En ella, y contiguas unas á otras, se construyen con planchas ó bastidores, las celdas, ó pequeños departamentos, numerados, que son necesarios; revestidas de verde, y las de los cardenales nombrados por el último Pontífice, de morado. En cada celda, con sus correspondientes divisiones, se acomoda un Cardenal, con los dos conclavistas, que hoy puede llevar; y si es Príncipe, tres. Todas las entradas á la galería, destinada al Cónclave, se muran y tabican, sin que quede más que una sola puerta, asegurada con cuatro llaves; dos por dentro, que conserva el Cardenal Camarlengo, y el primer maestro de ceremonias; y dos por fuera, que tiene en su poder el mariscal del Cónclave. En dicha puerta hay una ventana, por la que se dá audiencia á los Embajadores, al través de una cortina.

La comida y cosas necesarias para la vida, se sirven por tornos cerrados, y bajo la inspeccion de los conservadores de Roma y Prelados: dos auditores de la Rota; el maestro del Sacro palacio; prelados clérigos de la Cámara apostólica: y dos de los patriarcas, arzobispos, ú obispos, asistentes al sólio pontificio.

Hoy el Cardenal que sale del Cónclave, aunque sea por motivos de salud, no vuelve á entrar, y pierde el derecho de votar.

Los conclavistas del Cardenal, que muere

en el Cónclave, no salen hasta que éste concluye.

Para todas las necesidades de la vida, enciérranse tambien en el Cónclave confesores, el secretario del Sacro-colegio, maestros de ceremonias, médicos, cirujanos, farmacéuticos, dependientes de sacristía, el número necesario de criados, y maestro de obras.

Llámanse *conclavistas* las dos ó tres personas que cada Cardenal puede llevar consigo; y aunque parecen presentar el concepto de auxiliares domésticos, sirven más bien de secretarios de honor y para hacer compañía, y son de ordinario sacerdotes, hasta constituidas en dignidad. Todos visten uniformemente toga de seda de un mismo color, con mangas perdidas. Los legos adquieren la cualidad de nobles y la vecindad de Roma. Los eclesiásticos adquieren, además, preferencia para los beneficios, el derecho de resignarlos y sus pensiones, y exencion de toda tasa ó retribucion de derechos en la obtencion de bulas y cualesquier espediciones de la Datería. No pueden ser conclavistas los hermanos y sobrinos del Cardenal.

Todavía no está, sino reunido é instalado el Cónclave: pero no cerrado y en funciones de eleccion. Constituido así, en el dia inmediato, salvo algun incidente formal, los Cardenales, avisados en forma, se reunen en la capilla *Sixtina*. El dean dirige un discurso al caso, lee enseguida las reglas y constituciodes del Cónclave, y los Cardenales juran su conformidad y observancia. Luego, durante el dia, reciben en sus celdas visitas de prelados, de la nobleza y de los embajadores. Los encargados del órden y custodia del Cónclave juran cumplir fielmente con su deber.

Por la tarde, á son de campana, de órden del decano, se declara cerrado el Cónclave y empieza el rigor de la clausura. El Cardenal Camarlengo, acompañado de otros tres, hace formal visita, cerciorándose de que todo está en regla. El que sale, como ya se ha dicho, no vuelve á entrar. Para todo hay un centro gubernativo, compuesto del decano y tres Cardenales, jefes de órden, que, durante el Cónclave, proveen cuanto es necesario, y dan audiencia al gobernador de Roma, al Senado y á los embajadores, siempre como se ha dicho, por la ventana de la única puerta y al través de cortina.

Cerrado así, y constituido el Cónclave, el dia posterior empiezan las sesiones de eleccion. Véase **CARDENALES: PAPA**.

Por bula especial está mandado que, si durante la celebracion de un Concilio fallece el Papa, se suspenda aquel, y los Cardenales se constituyan en Cónclave, para la eleccion de nuevo Pontífice.

CONCLUSION EN JUICIO. Esta voz ha tenido, y aun tiene en el foro, una significacion técnica, á la cual equivalian en la legislacion de Partidas las frases «*cerradas las razones*: *concertadas las razones*,» espresando todas en el antiguo derecho, como en el sucesivo, hallarse legal y completamente planteada y desenvuelta por cada parte la cuestion, que sostiene en el litigio, y el juez, en el caso de poder resolver con el debido conocimiento de causa, y sin coartar la libertad y adecuada defensa de los contendientes.

Se concluia, en sus respectivos casos, para sentencia interlocutoria, para prueba y para sentencia definitiva. La fórmula estaba en el arbitrio de las partes, toda vez que espresase bien el concepto. La mas general y sencilla era, y aun es, en los juicios, en que la *conclusion* no ha sido *abolida* ó legalmente suprimida, la de añadir despues de la palabra *pido justicia*, del escrito correspondiente, las de «*y concluyo*, para la providencia interlocutoria que corresponda, ó que dejo solicitada; para prueba; como á su vez para definitiva.» Se concluye tambien indirectamente, con pretensiones que así lo supongan, como la de que el pleito se reciba á prueba; que sin mas dilacion se decida lo que corresponda, etc. De la conclusion de una parte se da traslado á la que no ha concluido, y con lo que conteste, y en su caso, acusada una rebeldía, el juez, con plena seguridad legal y jurídica, llama los autos, citadas las partes.

Lo que en este punto pudiera parecer mera ritualidad, es, sin embargo, la aplicacion de principios capitales de derecho, á saber: 1.° Que nadie debe ser juzgado, sin ser oido;

y claro es que no debe reputarse tal, el que no lo sea adecuada y completamente, el que no haya esplanado por completo su cuestion. 2.° Que, siendo las contiendas civiles negocios entre partes, interesando solo á éstas, y no directamente á la sociedad, que ganaria mas en que no hubiese ningun litigio, el juez no debe hacer en ellas nada de oficio. Y 3.° Que debiendo el mismo formar su juicio, *juxta alegata et probata*, ha de fallar siempre con el debido conocimiento de causa; que no será tal, sino cuando debidamente han sido oidas las partes.

Obtemperando al primero y segundo de estos principios, era lógico dejar á la prudencia de las partes el entenderse, hasta reputar planteada y desenvuelta su cuestion; y hasta ritualmente se ponia así en su mano, no dando por *cerradas las razones*, no teniendo el juez por planteada la cuestion, hasta que cada parte lo manifestaba así, espresando que concluia.

Pero la esperiencia del foro tiene acreditada la natural intemperancia del litigante, como á las veces la temeridad. El que por ella ha entrado en un litigio; el que, poseyendo, por ejemplo, ó usurpando, tiene la conciencia de que ha de ser desposeido ó desapropiado en la sentencia, obligado á pagar lo que tal vez no pueda, etc., claro es que diferirá el concluir, y que por este medio se llegaria, como se llegó, hasta el abuso.

Por otra parte, mientras el litigante tiene esa libertad, que hasta tal punto lleva en sí la del abuso; el juez, por la índole de la contienda, no puede hacer nada de oficio; y ciñéndose á este principio, se espone á autorizar el abuso, á que se presta el primero de los enunciados, y en caso opuesto á contrariarlo. Preciso fué que el legislador viniera en auxilio del órden judicial, pues nadie podia hacerlo como él: y muy oportunamente los Reyes Católicos ordenaron que con dos escritos por cada parte, ó, lo que es lo mismo, con los de réplica y dúplica, se dé el pleito por *concluso* para lo que proceda, aunque no concluyan las partes (ley 1.ª, tít. 15, libro 11, Nov. Recop.).

Tan importante determinacion, se confirmó todavia, reiteradamente (ley 2.ª, dichos título y libro: 3.ª, tít. 11, libro 7 id.: y regla 2.ª, art. 28 del Reglamento provisional para la administracion de justicia). Despues de ella, y pues que así concluia segun la ley, no habia por qué esperar la conclusion de las partes. A pesar de todo, por el influjo que tienen las prácticas autorizadas, y además inveteradas, continuó practicándose el antiguo sistema, hasta que vino á ponerle fin, estrechando los términos y haciéndolo innecesario, con una ligera escepcion, la ley de Enjuiciamiento civil de 1.° de Enero de 1856. En ella, efectivamente, no se habla ya de *conclusion*. Y como la misma dispone, que salvo el caso que esceptúa, los jueces y tribunales arreglen á la misma el procedimiento civil; y por otra parte declara derogadas todas las leyes y disposiciones, que contengan reglas sobre el mismo, es claro que queda suprimida la conclusion formularia; no la que está en la fuerza de las cosas. Ni por otra parte tendria aplicacion, despues de la fórmula estricta, prescrita para el demandante y demandado, obligándoles á consignar todas sus cuestiones de hecho y de derecho, en sus escritos de demanda y contestacion, y en su caso de réplica y dúplica. (Artículos 224, 225, 253 y 254.) Y todavia es notable al caso el tenor del art. 256: en los escritos de réplica y dúplica, tanto el actor, como el demandado, *fijarán definitivamente* los puntos de hecho y de derecho, objeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar los que hayan consignado en la demanda y contestacion. *En los mismos escritos, pedirán por medio de otrosíes, que se falle desde luego el pleito, ó que se reciba á prueba, si lo estimaren necesario.* Es decir, que concluyen, y solo ocurriendo algun hecho posterior, conducente, podrán pedir que el debate se amplíe, por medio del escrito, llamado por eso de *ampliacion*, lo propio que si, siendo anterior, no tuviesen noticia de él, jurándolo así. (Art. 260 y 261.)

Las disposiciones de la ley, no son aplicables á los juicios que tengan un procedimiento especial. (Art. 1414.) Este procedimiento ha de verse, al hablar de dichos juicios. En caso deficiente, así en las reglas del procedi-

miento, como en la práctica, los principios de derecho autorizan á suplirlo por la ley de Enjuiciamiento civil.

En las causas criminales de oficio, fué y siempre será mayor la libertad del juez, para ordenar y ampliar adecuadamente el procedimiento; tanto mas, cuanto que, sin una ley de procedimiento judicial, éste era y casi es todavia, prudencial y de práctica, salvo la importante mejora introducida por el Reglamento provisional.

Otra cosa era y tenia que ser en las causas entre partes. En cuanto á ellas, establece dicho Reglamento, que si las partes de consuno renuncian la prueba, y se conformaren con todas las declaraciones del sumario, haya el juez por conclusa desde luego la causa. (Regla 7.ª del art. 51.)

Asimismo establece que, pasado el término probatorio y acreditado así por nota del escribano (hoy actuario), mandará el juez que se unan á la causa las practicadas, y que todo se entregue á las partes por su órden, y por un término, que no pase de cinco dias á cada una; para que aleguen en vista de lo probado, debiendo tenerse por conclusa la causa, al presentarse el último alegato ó la renuncia de él, y en todo caso, al espirar el término concedido. (Regla 10 del mismo artículo.)

Esta disposicion, fué á poco modificada por el decreto de las Córtes de 11 de Octubre de 1820, restablecido por real decreto de Agosto de 1836, y en cuyo art. 13 se previene, que la recepcion á prueba en todas las causas criminales, deba ser *con calidad de todos cargos*, ó sea *para probar y haber probado*: en cuya fórmula, se comprende la prueba, la publicacion de probanzas, alegacion de bien probado en su caso, y citacion para sentencia.

En algunos juzgados, sin embargo, y principalmente en los superiores, se ponen los autos de manifiesto en la escribanía, ó se entregan á las partes por un breve término, á fin de que se informen para la vista.

Aquí entran los autores en esplicaciones de los medios de conviccion, que aun podian emplear las partes hasta la sentencia, no obstante la conclusion, y cuantas restricciones quieran suponerse en el procedimiento: á saber, posiciones, esplicaciones de su declaracion por algun testigo, presentacion de documentos, con juramento de no haber antes llegado á su noticia, de nuevos ó ignorados hechos, con el propio juramento; y á lo cual hoy responde adecuadamente en lo civil, el escrito de *ampliacion*, que en tales casos autoriza, como ya hemos dicho, la ley de Enjuiciamiento civil.

De ello volveremos á hablar, al tratar de las pruebas, y en particular de posiciones, juramentos, presentacion de escrituras y artículos análogos. Pero en todo caso, ha de tenerse presente, que la práctica autorizada suministra soluciones seguras; y en teoría, que todo puede autorizarlo la ley, menos la indefension y la denegacion de justicia.

Otra observacion conviene tener presente, y es, que si á las partes se conceden garantías para que en ningun caso puedan ser condenadas sin ser oidas; al juez hay que reconocerle, y se le reconoce en la teoría y en el hecho, la libertad y prudente arbitrio de no haber de fallar, sin el debido conocimiento de causa: y de aquí que el mismo podia y puede suplir, si bien siempre en términos de derecho y de práctica autorizada, los perjuicios, que en algun caso, podria inducir el rigor estricto de la conclusion por las partes; y, *para mejor proveer*, puede, hasta la sentencia, emplear de oficio medios de conviccion, como cotejo de escrituras, esplicacion de un testigo, posiciones, juramento, nuevo análisis, ó nuevo dictámen facultativo, vista ocular, etc. Así el juzgador, en fin, puede y debe hacer que nunca la justicia quede defraudada, y que sea una verdad el principio de que nadie sea juzgado sin ser oido.

CONCORDATO. Siendo la Iglesia católica una verdadera sociedad, sobre todo, y por lo que hace al objeto del presente artículo, en sus condiciones *extrínsecas*: implantanda además en la sociedad civil, y, por tanto, con los mismos súbditos, se comprende bien la frecuente posibilidad de dificultades, que, ya embaracen, ya comprometan ó rompan la armonía. De aquí la necesidad de acomodamientos y transacciones entre las dos

potestades: transacciones, sin embargo, que tocarian en lo imposible, cuando, mirando á la Iglesia como enemiga, era perseguida con encono, y sus hijos sacrificados con la última ferocidad. Tal fué el estado de la Iglesia en los primeros siglos; y aunque economizada la sangre, en el último tercio de ese período; no así la enemiga y las vejaciones hasta la paz de Constantino.

Con la paz de Constantino, entró la Iglesia en condiciones de normalidad y aun de ventajas, hasta prodigadas en un principio, empezando por la restitucion de sus bienes, violentamente arrebatados. En la precision de mostrarse agradecida, y en la conveniencia de poder contar con el favor de los Emperadores, de que tanto necesitaba para mejorar, y consolidar su estado, en vez de disputar, cedia: cedia, como es de suponer, en cosas justas; y tambien sin contienda, en cosas, que podia disputar á la potestad temporal; y de aquí el errado juicio, con que, andando el tiempo, se ha sostenido por algunos, como espondremos, que las transacciones con la Santa Sede no tienen fuerza de *pacto*, pues que nunca en ellas hay de parte de Su Santidad, sino concesiones de gracia.

Estaba sin duda en el curso de los sucesos un cambio de cosas en un sentido contrario; y no tardó en sobrevenir. Con la ruina del Imperio romano, la autoridad temporal, dividida, debilitada, desconocida, llegó al último grado de postracion; mientras la de la Iglesia se vigorizó y fué en aumento; y en muchos siglos, no era ya ella la que requeria con necesidad absoluta el auxilio de las potestades seculares; sino que mas bien lo dispensaba á las mismas, sobre todo en Occidente, y de ello nos suministran un testimonio irrefragable los concilios nacionales, muy señaladamente los de la Italia y España. La Europa cristiana no agradecerá nunca bastante bien á la Iglesia católica, el haber sido, en tan largo y angustioso período de siglos, el único centro, en que se reunieron y salvaron las luces y conocimientos, que podia alcanzar aquella sociedad, y el único poder eficaz moderador y benéfico, que hacia frente á los escesos y actos de fuerza, que la deshonraban, y que aun habian de aumentarse mas adelante con las violencias feudales.

Al través de tan angustiosas vicisitudes, una cosa tenia tambien que suceder, y sucedió: no decayendo, como no decayó, el fervor religioso, se multiplicaron con menos restricciones, que en otra situacion, los monasterios, cabildos, corporaciones é instituciones eclesiásticas, y aumentáronse así bien los títulos de patronato eclesiástico, agregándose por parte de los soberanos de España, hasta el universal de conquista; y con los patronatos, las nominaciones para cargos y piezas eclesiásticas, y las cuestiones sobre nominacion, en que habian de alegar los Reyes los poderosos títulos de conquista, fundacion y dotacion; y el jefe de la Iglesia, el suyo indisputable en principio de *colador universal*. La Iglesia, en suposicion de poder moderador, estendia su solicitud, segun las necesidades, aun al órden civil; con mayor libertad en las que eran de naturaleza dudosa, y digámoslo así, *mixti fori*.

Los Príncipes seculares, en fin, aun con buena fé, é inspirados por un sentimiento eficaz de proteccion, hacian intrusiones, que habia que tolerar; salvo su enormidad, como, por ejemplo, la creacion de obispados por propia autoridad.

Fácil es comprender que, si algun dia llegaba á normalizarse el ejercicio de los poderes eclesiástico y temporal, habria que deslindar lo que la accion de los tiempos habia implicado; y ese dia llegó, si bien iniciándose con lento desarrollo.

Entonces, como era de suponer, á la reclamacion, creyéndose cada parte firme en su derecho, se siguió la controversia, tanto mas difícil y empeñada, cuanto que era entre poderes, no solo soberanos; sino diversos; y uno de ellos espiritual, con menos libertad para transigir, que la potestad temporal, mientras por otra parte, la cualidad de jefe de la Iglesia, llevaba en sí un sentimiento de superioridad, que en el Monarca secular, como hijo de la misma, era de sumision reverente. Bien pronto, sin embargo, la buena fé, la necesidad y el interés recíproco, hicieron sentir de lleno, y se proclamó como un dogma prácti-

co, *la necesaria armonía entre el sacerdocio y el imperio, entre la Iglesia y el Estado*: principio salvador y benéfico, especie de *derecho previsorio constituyente*, que viene dominando y es preciso suponer que siempre dominará, como debe y conviene, en el modo de ser de las dos sociedades.

No por eso se evitaria, ni se evitó la contienda; pero se abria campo á las transacciones racionales. Del debate brotarian medios y teorías que lo harán empeñado, como el *jus cavendi*: el *derecho*, y al mismo tiempo *deber tuitivo*: las *regalías*, el *veto* ó *pase régio*, los *recursos de fuerza*, la *amortizacion*, la *inmunidad*, *etc.*; pero con eso y todo, en virtud del mencionado principio, más bien que á romper, se llegaria á transigir; y ese es el estado y la índole de las inevitables cuestiones y transacciones entre la Iglesia y el Estado.

Es de todos conocido, que en ellas se vienen empleando, y era natural, las mismas denominaciones y formas de obligarse, que en la sociedad civil, entre particulares y de nacion á nacion, como *convenio*, *convencion*, *transaccion*, *ajustamiento*, *avenencia*, *arreglo*, *negociacion*, *pacto*, *tratado*, y tambien con cierta especialidad técnica, *concordia* y *concordato*.

Es de notar que ninguna de ellas se emplea como específica y exclusivamente; salvo en parte las dos últimas; sino en su acepcion genérica, y con tal promiscuidad, que, á veces, razonando, se aplican todas, ó la mayor parte, á un mismo acto, sin excluir las de concordia y concordato; por lo que decimos que éstas se denominan así con cierta especialidad técnica, y no con especialidad absoluta. Así, el Concordato de 1737, es denominado en su contexto, además de concordato, *indisoluble concordia*, *ajustamiento*, *tratado*: el de 1753, en la misma forma, *concordia*, *convenio*, convencion, tratado; el solemnísimo de 1851, en los Breves de confirmacion, *convencion* y *pacto*; y en el mismo (art. 14), los solemnes concordatos de 1737 y 1753, son denominados meramente *convenios*.

Cuando el soberano temporal entabla solicitudes cerca de Su Santidad, no fundadas en razones de derecho; sino de conveniencia y como gracia, y por lo tanto sin formas de transaccion, ni diplomáticas, el otorgamiento se denomina *concesion*, y aun gracia. En ese caso se encuentran entre nosotros, por ejemplo, *las tres gracias de Cruzada*, *noveno* y *escusada*, y en el mismo tambien la reduccion de fiestas. Si además de razones de conveniencia, se alegan algunas, que pueden reputarse de derecho, como por ejemplo, el haber de atenuar el Monarca gravámenes de sus propios súbditos, mediando un cambio de contestaciones, sin forma diplomática, el otorgamiento ú obtencion, suele denominarse *concordia*, como entre nosotros la *Concordia Fucheneti*. Si, por último, la materia es transaccional, con apoyos de derecho por una y otra parte, acompañando á la negociacion todas las solemnidades y ofreciendo todas las garantías diplomáticas, de suerte que entre dos soberanos seculares se denominaria *tratado*, pudo ciertamente llamarse así, como tambien *pacto*, *arreglo*, *convenio*, como cualquiera otra transaccion internacional; pero desde un principio se llamó, y ha venido llamándose, *Concordato*: denominacion que espresa tal vez un género de respeto al Padre comun de los fieles por los Príncipes católicos, y precisamente por esa propia cualidad, no mediando la propia consideracion, cuando los mismos tratan en un todo de igual á igual con otros Soberanos seculares, y expresando así, que más bien que disputar y debatir con el Jefe de la Iglesia, á que ellos mismos pertenecen, se *ponen de acuerdo con él*: de aquí con propiedad y tecnicismo, *Concordato*.

Cierto que despues de la reforma ocurrió el ajustarse concordatos con Príncipes no católicos, porque tengan súbditos católicos en sus dominios: pero aun entonces se viene siguiendo, y probablemente se seguirá, el uso, y tecnología recibidos.

Por eso se vé, y habrá de ser por alguna razon, que desde que empezaron las transacciones solemnes de los diversos Estados con la Santa Sede, las que, en materias eclesiásticas por supuesto, reunen las formalidades diplomáticas que quedan expuestas, en vez de tratados, se han venido denominando *concor-*

datos. Merece atencion desde luego el célebre concordato *germánico*, celebrado ya en 19 de Marzo de 1448, entre el Papa Nicolás V y el Emperador Federico y otros Príncipes de Alemania: el no menos notable de 16 de Agosto de 1515, entre Leon X y Francisco I, y que forma parte del concilio Lateranense V, con ocasion de la conocida pragmática, decretada en la Asamblea de Bourges en 1438: y sucesivamente, y prescindiendo por ahora de los de España, el por demás importante de Francia de 1801, entre Pio VII y el Emperador Napoleon I, y el novísimo de Austria lo propio que los diversos celebrados con las repúblicas de América, que fueron dominios españoles.

Entre todos ellos, y otros que aun pueden citarse, hay una escepcion notable en el punto de denominacion, que vamos exponiendo, y es el, por todas sus formas y solemnidades diplomáticas, verdadero concordato, celebrado en 20 de Agosto de 1859, entre Pío IX é Isabel II, Reina de España, y que en vez de denominarse así, se nomina simplemente *convenio*; efecto, sin duda, de que se ajustó á poco del expresado concordato de 1851, entre las propias potestades, y como ampliativo ó adicional al mismo, por lo cual se enuncia *Convenio adicional al concordato de* 1851, siendo en todo rigor concordato, con todas las formas diplomáticas de tal, y como tambien se le denomina en el uso.

Visto ahora que los concordatos se celebran entre Potestades soberanas: que su índole es transaccional por lo comun: y que revisten todas las formas y solemnidades de un tratado ó pacto internacional, no habia por qué inquirir su autoridad y fuerza de obligar; sino que todas las esplicaciones que pudieran apetecerse, se resumen en el principio universal, natural y jurídico, *pacta sunt servanda*.

Pero no es así: algunos canonistas pretenden que el Papa, por su calidad y por la índole de la materia, no queda estrictamente obligado; sino que puede receder, segun lo exija la utilidad de la Iglesia. Alegan que el Papa, como Vicario de Jesucristo, ha recibido solo en depósito su inmenso poder, enca-minado estrictamente al bien espiritual de los fieles, ó sea á su salvacion eterna; y que este poder no puede el Papa abdicarlo en ningun caso, sin abdicar su alta mision.

Esta doctrina, mas bien celosa que ilustrada, ha sido modificada convenientemente, y hoy no hay medio de sostenerla. Apenas puede hacerse un supuesto más injurioso á la autoridad del Papa, y á su asistencia divina, que el de admitir que puede, á sabiendas, autorizar nada que no sea por el bien de la Iglesia. Es por otra parte de enseñanza y ordenacion divina, que se dé á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César: y si entre dos sociedades, implantadas la una en la otra, y por tanto con los mismos súbditos, sobreviene, como puede suceder, colision, no por supuesto en el dogma, ni en la moral cristiana; que eso no seria de concordato, ni otra estipulacion; sino en derechos y circunstancias esternas, ó que pueden sustituirse, es imposible sostener que el Jefe Supremo de la espiritual no está obligado al acomodamiento posible, sin que una vez reconocida solemnemente la obligacion, pueda receder de ella á su arbitrio y sin mútuo convenio.

Todavía estas consideraciones de sólida reflexion, han venido á ser vigorizadas con argumentos de irrefragable autoridad. No se rechazará el testimonio de uno de los más modernos y autorizados escritores de derecho canónico, el sábio Cardenal Soglia, que tratando estensamente la cuestion, y despues de todas las controversias, asienta como solucion terminante: «Los concordatos, pues, tienen el carácter, *no de privilegio*; sino de *pacto*: *pacto, no temporal y personal*; sino *efectivo y perpétuo, que exige religioso cumplimiento*.» (Sóglia, *Instituciones canónicas*, edicion de Loreto, p. 155.)

«¿Dónde está la prueba (dice el autor del *Febronio* abreviado, rechazando la doctrina contraria del fingido *Febronio*), de que la Santa Sede no se crea ligada por los concordatos? Semejante suposicion es, absolutamente hablando, una gran falsedad. Para convencerse de ello, basta oir en el particular á los Papas Inocencio X, Clemente VII, Pablo V y Gregorio XIII.»

No es menos decisiva la declaracion de Clemente VIII, citada por Lockies, en su Introduccion al derecho eclesiástico universal: «atendiendo nos (dice el Sumo Pontífice), á que los dichos concordatos (los de Alemania) *tienen la fuerza propia de un pacto entre partes*, y á que lo que deriva su fuerza de un pacto, no se ha acostumbrado abrogar, *ni debe*, sin consentimiento de las mismas partes etc.»

Y no ya en un concordato; sino aun en un mero arreglo, donde quiera que media convenio entre partes, rige, y debe aplicarse el citado principio, consagrado por todos los derechos, *pacta sunt servanda*. Así, en el arreglo de capellanías colativas, propuesta por el Gobierno español, y aprobado por Su Santidad (*Coleccion legislativa*, tomo 97, página 1187) con cláusula de que en una instruccion, que formularian *de comun acuerdo* el Gobierno y el Nuncio, se esplanaria el plan, se consignó por el hecho que no podria alterarse, sino por acuerdo de ambas partes.

Es, por último, tan atendible y decisiva, como puede apetecerse en este punto, la siguiente declaracion, consignada en el Concordato español de 1851 (art. 45): «Si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. Católica *se pondrán de acuerdo para resolverla* amigablemente.

Es, pues, un principio incontestable y de derecho universal, que los Concordatos tienen fuerza de *tratado* ó de pacto internacional, igualmente obligatorio para ambas partes contratantes; y si, atendidas las condiciones de la soberanía pontificia, no es de temer, caso de romper el pacto la parte contraria, un *casus belli*, como sucederia entre Príncipes ó potencias seculares, eso mismo compromete mas, para la debida fidelidad, la rectitud y pundonor nacional de la potestad temporal, que se ligue por un Concordato; sin que á su vez, pueda por ningun título considerarse menos ligada la córte de Roma.

Algo parece turbar esta doctrina el incidente ocurrido entre Fernando VI y Benedicto XIV, al aplicarse el Concordato de 1753. Creyó el Monarca español que el Nuncio, en las instrucciones que comunicaba, contrariaba el Concordato, así como tambien la Datería apostólica, de cuyas resoluciones podrian originarse pleitos y embarazos. Expuesto así al Pontífice, éste, por Breve de 10 de Setiembre de 1753, desaprobó la conducta del Nuncio; aunque no así la de la Datería, creyendo, por el contrario, que aun podria la misma fundarse en el Concordato, y en tal concepto, «para cortar los pleitos (dice, §. 3.°), fortalecer y hacer mas y mas estable la paz y armonía recíproca, cedemos gustosamente el derecho, que en este negocio podria pretender nuestra Datería, aun conforme al Concordato; *el cual, en cuanto sea necesario, con autoridad apostólica, derogamos, por el tenor de los presentes, y queremos que se tenga por derogado, en esta parte tan solamente.*»

En verdad que, atendiendo á los términos absolutos de la resolucion, parece que el Pontífice se siente revestido de una potestad libre, derogatoria del Concordato; pues lo mismo seria en ese punto poder derogar una parte, que derogarlo todo. Pero, considerando, en primer lugar, que la cláusula derogatoria, por mas absoluta que parezca, tiene por objeto derogar en su caso, no un derecho del Rey; sino el que cree el Sumo Pontífice que le asiste, y le es peculiar; y en segundo que, aun en eso *defiere á una peticion* del Monarca, la cual encierra por necesidad su *consentimiento*, y por tanto el recíproco de ambas partes, queda intacta la teoría sentada, sobre la fuerza recíprocamente obligatoria de un Concordato. Véanse aun los dos artículos subsiguientes.

CONCORDATOS ESPAÑOLES. Son cuatro los solemnemente ajustados y publicados; y tres los formulados; pero que no llegaron á formalizarse, de los que por tanto, no harémos sino mencion. Son estos los de 1714 y 1717, entre Clemente XI y Felipe V, y el de 1849, entre Pio IX y la Reina Isabel II, siendo plenipotenciario D. José Castillo y Ayensa: Concordato que no fué ratificado por la Corona, entre otras cosas, porque no contenia *sanacion* por las ventas de bienes nacionales, como esplicarémos en su artículo.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Sec. I. Reseña histórica y Concordato de 1737.
Sec. II. Idem de 1755.
Sec. III. Idem de 1851.
Sec. IV. Idem de 1859.

SECCION I.

Reseña histórica y Concordato de 1737.

Pareceria singular que la España sea de las últimas, entre las naciones cristianas, que ha celebrado Concordatos. Así se vé, en el siglo XV, el célebre Concordato *germánico*, de 1448, entre Nicolás V y el Emperador Federico IV y Príncipes de Alemania: y en el siglo XVI, el no menos notable Concordato francés, entre Leon X y el Rey Francisco I, en 1515; mientras los primeros Concordatos con España son del siglo XVIII. Para todo puede ser una razon, la radical armonía, en puntos de disciplina eclesiástica, entre España y la Santa Sede, arreglando fácilmente las contiendas por *concordias* y simples convenios, y aun sin eso por bulas y breves: la constante unidad católica en España: y el que los siglos no habian podido desvirtuar los hábitos y sentimientos de armonía y sumision, arraigados por Recaredo y la dinastía goda, con su código memorable del *Fuero Juzgo*; y continuados por Alfonso el Sábio, y asimismo su código inmortal de las Partidas, por San Fernando y por los Reyes Católicos.

Ya en 1634, el Reino, reunido en Córtes en Madrid, espuso necesidades y perjuicios, cuyo remedio habia de pedirse á Roma: y de órden del Rey Felipe IV se formó y elevó al Santo Padre el célebre *Memorial de Chumacero*, de que hablamos en su lugar, como tambien de la llamada *Concordia Facheneti*, que fué por entonces su único resultado.

Pero corriendo los tiempos, la política se implicó, habian de agravarse las dificultades, y lo fueron con sucesos de la mayor entidad. Sabido es que en la guerra de sucesion, el Papa Clemente XI reconoció á Cárlos de Austria, competidor de Felipe V. En su consecuencia, Felipe V, en 1709, cortó terminantemente toda relacion con Roma, cerró la Nunciatura, prohibió la salida del numerario para aquella córte, y puso al Nuncio en la frontera. Medió despues la Francia, y cediendo Felipe V, nombró una junta de sugetos competentes en materia canónica, los cuales, partiendo de los agravios espuestos en el *Memorial de Chumacero*, formaron la propuesta ó *memorandum* con que D. Rodrigo Villalpando, despues Marqués de la Compuesta, marchó á París en 1714. Allí, con el Nuncio de Su Santidad Aldrobandi, ajustó un Concordato, que la Córte Romana no ratificó, y es uno de los tres mencionados, no llevados á cabo.

Habiendo de reiterarse la gestion, vió entonces la luz pública el tambien célebre *Memorial de Macanaz*, que tenia por base el de Chumacero. Vino á Madrid, como plenipotenciario, el ya mencionado Monseñor Aldrobandi, que con el Cardenal Alberoni, Ministro de Estado, negoció un nuevo Concordato, que firmado en 17 de Junio de 1717, fué rechazado por la Córte de España, saliendo estrañado Alberoni.

Con las dificultades crecia la necesidad de un acomodamiento entre las dos Potestades, y sin embargo, corrian los años agravándolas. Así llegaron las cosas hasta 1737. Habia muerto ya el Papa Clemente XI, y ocupaba la Silla de San Pedro Clemente XII. Se pensó en un nuevo Concordato, y, como se dice en el testo del mismo, en terminar las diferencias y alejar la ocasion de nuevos disturbios «por medio de una firme é indisoluble concordia.» Felipe V nombró plenipotenciario al efecto al Cardenal Aquaviva, y Clemente XII al Cardenal Firrao, llevando aquel como base de la negociacion el *memorandum* formado 23 años antes por el Marqués de la Compuesta: y en 23 de Setiembre de 1737 fué firmado, y en 18 de Octubre del mismo ratificado por Felipe V el Concordato de que tratamos. Es como sígue, y de él volvemos á hacer mérito en la seccion siguiente.

Concordato de 1737.

...«Art. 1.° Su Majestad Católica, para hacer á todos manifiesta la perfecta union que quiere tener con Su Santidad y con la Sede Apostólica, y cuán de corazon es su ansia de conservar sus derechos á la Iglesia, mandará que se restablezcan plenamente el comercio con la Santa Sede: que se dé, como antes, ejecucion á las bulas apostólicas y matrimoniales: que el Nuncio destinado por Su Santidad, el tribunal de la Nunciatura y sus ministros, se reintegren sin alguna disminucion (aun levísima) en los honores, facultades, jurisdicciones y prerogativas, que por lo pasado gozaban: y en conclusion, que en cualquier materia que toque á la autoridad de la Santa Silla, como á la jurisdiccion é inmunidad eclesiástica, se deba observar y practicar todo lo que se observaba y practicaba antes de estas últimas diferencias: esceptuando solamente aquello, en que se hiciere alguna mutacion ó disposicion en el presente *Concordato*; por órden á lo cual se observará lo que en él se ha establecido y dispuesto, removiendo y abrogando cualquiera novedad que se haya introducido, sin embargo de cualesquiera órdenes y decretos contrarios, espedidos en lo pasado por S. M. ó sus Ministros.

Art. 2.° Para mantener la quietud y tranquilidad pública, é impedir que con la esperanza del asilo se cometan algunos mas graves delitos, que puedan ocasionar mayores disturbios, dará Su Santidad, en cartas circulares á los obispos, las órdenes necesarias para establecer que la inmunidad local no sufrague en adelante á los salteadores ó asesinos de caminos, aun en el caso de un solo y simple insulto, con tal que en aquel acto mismo se siga muerte ó mutilacion de miembros en la persona del insultado. Igualmente ordenará que el crímen de lesa magestad, que por las constituciones apostólicas está escluido del beneficio del asilo, comprenda tambien á aquellos que maquinaren ó trazaren conspiraciones, dirijidas á privar á S. M. de sus dominios en el todo ó en parte. Y finalmente para impedir en cuanto sea posible la frecuencia de los homicidios, estenderá Su Santidad con otras letras circulares á los Reinos de España, la disposicion de la bula que comienza: *In supremo justitiæ solio*, publicada últimamente para el Estado Eclesiástico.

Art. 3.° Habiéndose en algunas partes introducido la práctica de que los reos aprehendidos fuera del lugar sagrado, aleguen inmunidad, y pretendan ser restituidos á la Iglesia por el título de haber sido estraidos de ella, ó de lugares inmunes, en cualquiera tiempo, huyendo de este modo del castigo debido á sus delitos, cuya práctica se llama comunmente con el nombre de *Iglesias frias*; declara Su Santidad que en estos casos no gocen de inmunidad los reos, y espedirá á los obispos de España letras circulares sobre este asunto, para que en su conformidad publiquen los edictos.

Art. 4.° Porque S. M. particularmente ha insistido en que se providencie sobre el desórden que nace del refugio que buscan los delincuentes en las ermitas é iglesias rurales y que les da ocasion y facilidad de cometer otros delitos impunemente; se mandará igualmente á los obispos, por letras circulares, que no gocen de inmunidad las dichas iglesias rurales y ermitas, en que el Santísimo Sacramento no se conserva, ó en cuya casa contigua no habita un sacerdote para su custodia, con tal que en ellas no se celebre con frecuencia el sacrificio de la misa.

Art. 5.° Para que no crezca con esceso y sin alguna necesidad el número de los que son promovidos á las órdenes sagradas, y la disciplina eclesiástica se mantenga con vigor en órden á los inferiores clérigos; encargará Su Santidad estrechamente con breve especial á los obispos la observancia del Concilio de Trento, y precisamente sobre lo contenido en la sess. 21, cap. 2, y la sess. 23, cap. 6, *de Reform.*, bajo las penas que por los sagrados cánones, por el Concilio mismo y por constituciones apostólicas están establecidas: y á efecto de impedir los fraudes que hacen algunos en la constitucion de los patrimonios, ordenará Su Santidad que el patrimonio sagrado no esceda en lo venidero de la suma de 60 escudos de Roma en cada un año.

Demas de esto, porque se hizo instancia por parte de S. M. Católica, para que se provea de remedio á los fraudes y colusiones que hacen muchas veces los eclesiásticos, no solo en las constituciones de los referidos patrimonios; sino tambien fuera de dicho caso, fingiendo enajenaciones, donaciones y contratos, á fin de eximir injustamente á los verdaderos dueños de los bienes, bajo de este falso color, de contribuir á los derechos reales, que segun su estado y condicion están obligados á pagar: proveerá Su Santidad á estos inconvenientes con breve dirigido al Nuncio Apostólico, que se deba publicar en todos los obispados, estableciendo penas canónicas y espirituales, con escomunion *ipso facto incurrenda*, reservada al mismo Nuncio y á sus sucesores, contra aquellos que hicieren los fraudes y contratos colusivos arriba espresados ó cooperaren á ellos.

Art. 6.° La costumbre de erigir beneficios eclesiásticos que hayan de durar por limitado tiempo, queda abolida del todo, y Su Santidad espedirá letras circulares á los obispos de España, si fuere necesario, mandándoles que no permitan en adelante semejantes erecciones de beneficios *ad tempus*; debiendo estos ser instituidos con aquella perpetuidad que ordenan los cánones sa-

grados; y los que están erigidos de otra manera no gocen de exencion alguna.

Art. 7.° Habiendo S. M. hecho representar que sus vasallos legos están imposibilitados de subvenir con sus propios bienes y haciendas á todas las cargas necesarias para ocurrir á las urgencias de la monarquía, y habiendo suplicado á Su Santidad que el indulto, en cuya virtud contribuyen los eclesiásticos á los 19 millones y medio, impuestos sobre las cuatro especies de carne, vinagre, aceite y vino, se estienda tambien á los cuatro millones y medio que se cobran de las mismas especies por cuenta del nuevo impuesto de los 8,000 soldados: Su Santidad, hasta tanto que sepa con distincion si los cuatro millones y medio de ducados de moneda de España, que pagan los seglares, como arriba se dijo, por cuenta del nuevo impuesto, y por el tributo de los 8,000 soldados, se exijen ó en seis años ó en uno; y hasta tener una plena y especifica informacion de la cantidad y cualidad de las otras cargas, á que los eclesiásticos están sujetos, no puede acordar la gracia que se ha pedido; dejando sin embargo suspenso este artículo hasta que se liquiden dichos impuestos, y se reconozca si es conveniente gravar á los eclesiásticos mas de lo que al presente están gravados. Su Santidad, por dar á S. M. entre tanto una nueva prueba del deseo que tiene de complacerle en cuanto sea posible, le concederá un indulto por solos cinco años, en virtud del cual paguen los eclesiásticos el ya dicho nuevo impuesto y el tributo de los 8,000 soldados, sobre las cuatro mencionadas especies de vinagre, carne, aceite y vino, en la misma forma que pagan los 19 millones y medio; pero con tal que los dichos 4 millones y medio se paguen distribuidos en seis años; y que la parte en que deben contribuir los eclesiásticos, no esceda la suma de 150,000 ducados ánuos, de moneda de España. Resérvase entre tanto Su Santidad el hacer las diligencias y tomar las informaciones ya insinuadas, antes de dar otra disposicion sobre dicha materia; con espresa declaracion de que, en caso que Su Santidad ó sus sucesores no vengan en prorogar esta gracia, concedida por los cinco años, á mas tiempo, no se pueda jamás decir, ni inferir de esto, que se ha contravenido al presente *Concordato*.

Art. 8.° Por la misma razon de los gravísimos impuestos con que están gravados los bienes de los legos, y de la incapacidad de sobrellevarlos á que se reducirian con el transcurso del tiempo, si aumentándose los bienes que adquieren los eclesiásticos por herencias, donaciones, compras ú otros títulos, se disminuyese la cantidad de aquellos, en que hoy tienen los seglares dominio y están con el gravámen de los tributos régios; ha pedido á Su Santidad el Rey Católico se sirva ordenar que todos los bienes que los eclesiásticos han adquirido desde el principio de su reinado, ó que en adelante adquirieren con cualquier título, están sujetos á aquellas mismas cargas, á que lo están los bienes de los legos. Por tanto, habiendo considerado Su Santidad la cantidad y cualidad de dichas cargas y la imposibilidad de soportarlas, á que los legos se reducirian, si por órden á los bienes futuros no se tomase alguna providencia; no pudiendo convenir en gravar á todos los eclesiásticos como se suplica, condescenderá solamente en que todos aquellos bienes, que por cualquier título adquirieren cualquiera iglesia, lugar pío ó comunidad eclesiástica, y por esto cayeren en mano muerta, queden perpétuamente sujetos, desde el dia en que se firmare la presente concordia, á todos los impuestos y tributos régios que los legos pagan, á escepcion de los bienes de primera fundacion; y con la condicion de que estos mismos bienes que hubieren de adquirir en lo futuro, queden libres de aquellos impuestos, que por concesiones apostólicas pagan los eclesiásticos, y que no puedan los tribunales seglares obligarlos á satisfacerlos; sino que esto lo deban ejecutar los obispos.

Art. 9.° Siendo la mente del Santo Concilio de Trento, que los que reciben la primera tonsura, tengan vocacion al estado eclesiástico, y que los obispos, despues de un maduro exámen, la den á aquellos solamente, de quienes probablemente esperen que entren en el órden clerical, con el fin de servir á la Iglesia y de encaminarse á las órdenes mayores; Su Santidad, por órden á los clérigos que no fueren beneficiados, y á los que no tienen capellanías ó beneficios que escedan la tercera parte de la cóngrua, tasada por el sínodo para el patrimonio eclesiástico, los cuales, habiendo cumplido la edad, que los sagrados cánones han dispuesto, no fueren promovidos por su culpa ó negligencia á los órdenes sacros, concederá que los obispos, procediendo las advertencias necesarias, les señalen para pasar á las órdenes mayores un término fijo que no esceda de un año; y que si pasado este tiempo no fueren promovidos por culpa ó negligencia de los mismos interesados, que en tal caso no gocen exencion alguna de los impuestos públicos.

Art. 10. No debiéndose usar de las censuras sino es *in subsidium*, conforme á la disposicion de los sagrados cánones y al tenor de lo que está mandado por el Santo Concilio de Trento, en la sess. 25 *de Regul.*, cap. 3, se encargará á los ordinarios que observen la dicha disposicion conciliar y canónica; y no solo que las usen con toda la moderacion debida; sino tambien que se abstengan de fulminarlas siempre que con los remedios ordinarios de la ejecucion real ó personal se pueda ocurrir á las necesidades de imponerlas; y que solamente se valgan de ellas, cuando no se pueda proceder á algunas de dichas ejecuciones

contra los reos, y estos se mostraren contumaces en obedecer los decretos de los jueces eclesiásticos.

Art. 11. Suponiéndose que en las órdenes regulares hay algunos abusos y desórdenes, dignos de corregirse, deputará Su Santidad á los metropolitanos con las facultades necesarias y convenientes para visitar los monasterios y casas regulares, y con instruccion de remitir los autos de la visita, á fin de obtener la aprobacion apostólica, sin perjuicio de la jurisdiccion del Nuncio apostólico, que entretanto y aun mientras durare la visita, quedará en su vigor en todo, segun la forma de sus facultades y del derecho; y establecido á los visitadores término fijo para que la deban concluir dentro del espacio de tres años.

Art. 12. La disposicion del Sagrado Concilio de Trento concerniente á las causas de primera instancia, se hará observar exactamente; y en cuanto á las causas en grado de apelacion, que son mas relevantes, como las beneficiales que pasan del valor de veinte y cuatro ducados de oro de cámara, las jurisdiccionales, matrimoniales, decimales, de patronato y otras de esta especie, se conocerá de ellas en Roma; y se cometerán á *jueces in partibus* las que sean de menor importancia.

Art. 13. El concurso á todas las iglesias parroquiales, aun vacantes *juxta decretum, et in Roma*, se hará *in partibus* en la forma ya establecida, y los obispos tendrán la facultad de nombrar á la persona mas digna cuando vacare la parroquia en los meses reservados al Papa. En las demás vacantes, aunque sean por resultas de las ya provistas, los ordinarios remitirán los nombres de los que fueren aprobados, con distincion de las aprobaciones en primero, segundo y tercer grado, y con individuacion de los requisitos de los opositores al concurso.

Art. 14. En consideracion al presente *concordato*, y en atencion tambien á que regularmente no son pingües las parroquias de España; vendrá Su Santidad en no imponer pensiones sobre ellas; á reserva de las que se hubieren de cargar á favor de los que las resignan, en caso de que con testimoniales de los obispos se juzgue conveniente y útil la renuncia, como tambien en caso de concordia entre dos litigantes sobre la parroquia misma.

Art. 15. En cuanto á la reserva de pensiones sobre los demás beneficios, se observará aquello mismo que hasta estas últimas diferencias se ha practicado; pero no se harán pagar renovatorias en lo venidero por las prebendas y beneficios que se hubieren de conferir en lo futuro, quedando intactas las renovatorias futuras, que cedieren en favor de aquellas personas particulares, que por la Dataría han tenido ya las pensiones.

Art. 16. Para evitar los inconvenientes que resultan de la incertidumbre de las rentas de los beneficios y de la variedad con que los mismos provistos espresan su valor, se conviene en que se forme un estado de los réditos ciertos é inciertos de todas las prebendas y beneficios, aunque sean de patronato; y que éste se haga por medio de los obispos y ministros, que por parte de la Santa Sede habrá de destinar el Nuncio, esceptuando empero las iglesias y beneficios consistoriales, tasados en los libros de cámara, en los cuales no se innovará cosa alguna: pero mientras este estado no se formare, se observará la costumbre. Luego que la nueva tasacion esté hecha, antes de ponerla en ejecucion, se deberá establecer el modo con que se ha de practicar, sin que la Dataría, Cancelaría, ni los provistos, queden perjudicados, tanto por lo que mira á la imposicion de las pensiones, como por lo que mira al coste de las bulas y paga de las medias annatas; y entre tanto se observará del mismo modo lo que hasta ahora ha sido de estilo.

Art. 17. Así en las iglesias catedrales, como en las colegiatas, no se concederán las coadjutorías sin letras testimoniales de los obispos, que atesten ser los coadjutores idóneos á conseguir en ellas canonicatos; y en cuanto á las causas de la necesidad y utilidad de la Iglesia, se deberá presentar testimonio del mismo ordinario ó de los cabildos; sin cuya circunstancia no se concederán dichas coadjutorías. Llegada empero la ocasion de conceder alguna, no se le impondrán en adelante á favor del propietario pensiones ú otras cargas; ni á su instancia en favor de otra tercera persona.

Art. 18. Su Santidad ordenará á los Nuncios apostólicos que nunca concedan dimisorias.

Art. 19. Siendo una de las facultades del Nuncio apostólico conferir los beneficios que no escedan de veinte y cuatro ducados de cámara; y resultando muchas veces entre los provistos controversias sobre si la relacion del valor es verdadera ó falsa; se ocurrirá á este inconveniente con la providencia de la nueva tasa que se dijo arriba, en la cual estará determinado y especificado el valor de cualquiera beneficio. Pero hasta tanto que dicha tasa se haya efectuado, ordena Su Santidad á su Nuncio, que no proceda á la colacion de beneficio alguno, sin haber tenido antes el proceso, que sobre su valor se hubiere formado ante el obispo del lugar en donde está erigido: en cuyo proceso se hará por testimonio la prueba de los frutos ciertos é inciertos del beneficio.

Art. 20. Las causas que el Nuncio apostólico suele delegar á otros que á los jueces de su audiencia y se llaman jueces *in curia*, nunca se delegarán sino es á los jueces nombrados por los sínodos, ó á personas que tengan dignidad en las iglesias catedrales.

Art. 21. Por lo que mira á la instancia que se

ha hecho sobre que las costas y espórtulas en los juicios del tribunal de la Nunciatura, se reduzcan al arancel que en los tribunales Reales se practica y no le escedan; siendo necesario tomar otras informaciones para verificar el esceso que se sienta de las tasas de la Nunciatura, y juzgar si hay necesidad de moderarlas; se ha convenido en que se dará providencia luego que lleguen á Roma las instrucciones que se tienen pedidas.

Art. 22. Acerca de los espolios y nombramiento de sus colectores, se observará la costumbre; y en cuanto á los frutos de las iglesias vacantes, así como los Sumos Pontífices, y particularmente la Santidad de N. M. S. Padre, que hoy reina felizmente, no han dejado de aplicar siempre para uso y servicios de las mismas iglesias una buena parte; así tambien ordenará Su Santidad que en lo porvenir se asigne la tercera parte para servicio de las iglesias y pobres, pero desfalcando las pensiones que de ella hubieren de pagarse.

Art. 23. Para terminar amigablemente la controversia de los patronatos, de la misma manera que se han terminado las otras como Su Santidad desea; despues que se haya puesto en ejecucion el presente ajustamiento, se deputarán personas por Su Santidad y por S. M., para reconocer las razones que asisten á ambas partes; y entretanto se suspenderá en España pasar adelante en este asunto; y los beneficios vacantes ó que vacaren, sobre que pueda recaer la disputa del patronato, se deberán proveer por Su Santidad, ó en sus meses por los respectivos ordinarios, sin impedir la posesion á los provistos.

Art. 24. Todas las demás cosas que se pidieron y espresaron en el resúmen referido, formado por el señor marqués de la Compuesta, D. José Rodrigo Villalpando, y que se exhibió á Su Santidad, como arriba se dijo, en los cuales no se ha convenido en el presente tratado, continuarán observándose en lo futuro del modo que se observaron y practicaron en lo antiguo, sin que jamás se puedan controvertir de nuevo. Y para que nunca se pueda dudar de la identidad del dicho resúmen, se harán dos ejemplares, uno de los cuales quedará á Su Santidad y otro se enviará á S. M., firmados ambos por Nos los infrascritos.

Art. 25. Si no se ajustaren al mismo tiempo los negocios pendientes entre la Santa Sede y la córte de Nápoles, promete S. M. cooperar con eficacia á que se espidan y concluyan feliz y cuidadosamente; pero cuando esto no pudiese conseguirse, antes sí por esto (lo que Su Santidad espera que no suceda) en algun tiempo se aumentaren las discordias y sinsabores; promete S. M. que jamás contravendrá por esta causa á la presente concordia, ni dejará de perseverar en la buena armonía, establecida ya con la Santa Sede apostólica.

Art. 26. Su Santidad y S. M. Católica aprobarán y ratificarán el tratado presente; y de las letras de ratificacion se hará respectivamente la consignacion y cange en el término de dos meses ó antes si fuere posible (*).

En fé de lo cual Nos los infrascritos, en virtud de las respectivas plenipotencias antes espresadas de Su Santidad y S. M. Católica, hemos firmado el presente *Concordato* y selládolo con nuestro propio sello.

En el palacio Apostólico del Quirinal, en el dia veinte y seis de Setiembre de mil setecientos treinta y siete.

(L. S.) G. Cardenal Firrao.

(L. S.) T. Cardenal Aquaviva.

Publicado por breve confirmatorio de Su Santidad en 14 de Noviembre de 1737.

SECCION II.

Concordato de 1753.

No satisfizo el concordato de 1737; calificándolo alguno, de «opuesto á las costumbres, concilios y leyes de la monarquía.» El docto D. Gregorio Mayans y Siscar, en sus *Observaciones legales, históricas y críticas al Concordato de* 1753, sobre censurarlo acerbamente, parece inclinarse á la opinion de los que dice haberlo reputado *nulo*; y que á no haber sobrevenido la muerte de Felipe V, por él se hubieran espuesto y publicado las pruebas de la nulidad.

Salva la consideracion que merece tan respetable escritor, su opinion es insostenible. Insuficiente y aun agraviado, podia ser el Concordato; y en ese caso, reclamable la debida reparacion; pero no nulo, pues la nulidad habria de fundarse en falta de autoridad, que una vez ratificado no es fácil hallar, ni de parte de los plenipotenciarios, ni de las potestades otorgantes. Llégase á todo que, muchos años despues, algunas de sus disposiciones, se publicaban y mandaban observar por leyes del Reino, incluyéndolas en la Nov. Recop., como es de ver, recorriendo su libro 1.°

Era insuficiente, sí. No respondia á todas

(*) Con efecto, este Concordato fué ratificado por el Rey Felipe V en 18 de Octubre del referido año de 1737, y por el Papa Clemente XII en 12 de Noviembre inmediato siguiente.

las cuestiones pendientes; se ratificó con ligero exámen; y para la reparacion de todo, se pensó luego en nuevo Concordato. Y es verdad, tambien, que no obtuvo el *pase* del Consejo, ni se circuló á las universidades y tribunales para su cumplimiento y ejecucion; ni, por último, se publicó por *pragmática*, como correspondia; sino meramente por real decreto.

Se pensó luego, decimos, en nuevo Concordato; siendo el fundamento el general é indicado de no haber respondido á lo que se deseaba y necesitaba: el haber, por el contrario, hasta desandado terreno, viendo el tenor derogatorio de su artículo 1.° de ventajas, bien obtenidas anteriormente por la Corona, y reintegradas las prerogativas, honores y jurisdiccion del Nuncio y de la Nunciatura, con retroaccion absoluta, sin permitir en ella diminucion, *ni aun levísima*; y por último, el haber dejado pendiente, para tratada en otra ocasion, la cuestion del *patronato universal*, como se vé por el art. 23 del mismo.

Empezaron luego las dudas y contiendas sobre 11 de sus artículos, y á los tres años, se convino ya, en que el punto del patronato se tratase en Roma; y los demás con el Nuncio de Madrid. Al Cardenal Aquaviva (á quien se acusaba de no haber sacado el partido conveniente en el anterior Concordato), se asoció en Roma por España al Cardenal Belluga, con encargo de que promoviese ante Su Santidad la cuestion del patronato, á cuyo efecto, el fiscal del Consejo de Castilla, D. Gabriel de Olmeda, escribió, de órden del Rey, el luminoso *memorandum*, que lleva su nombre. Dando cuenta luego el Cardenal Belluga de los reparos que oponia el secretario de Estado, ya Cardenal, Aldrobandi, al papel de Olmeda, éste preparó una luminosa réplica, que aprobada por la Cámara, se mandó á los Cardenales negociadores. Las cuestiones siguieron implicándose, y los Cardenales Belluga y Aquaviva, fallecieron sin haber adelantado nada, como nada tampoco se adelantaba en Madrid, en las cuestiones con el Nuncio.

Pero era Pontífice el gran Benedicto XIV, y no podian cuestiones de tal índole quedarse sin resolucion, y mas, cuando amenazaba un nuevo rompimiento. Entonces el marqués de la Ensenada, Ministro de Fernando VI, grandemente auxiliado por D. Manuel Ventura Figueroa, ilustrado auditor de la Rota romana, abordó la cuestion directamente con Su Santidad. La fama ha propalado, que el egregio Pontífice trató y resolvió por sí la cuestion, sin oir á sus Cardenales; y en 11 de Enero de 1753 apareció firmado y concluido el justamente celebrado Concordato, autorizado por el Cardenal Valenti, en representacion del Papa, y por el mencionado Figueroa, por España, notándose desde luego que al final, para completar la solemnidad, intervenian los Cardenales.

La luminosa constitucion pontificia de su confirmacion y publicacion, con un breve esplicatorio, son del mismo Pontífice, aquella de 9 de Junio de 1853, y este de 10 de Setiembre del propio año.

He aquí el tenor del espresado Concordato de 1753:

...«No habiendo habido controversias sobre la pertenencia á los Reyes Católicos de las Españas, del Real Patronato, ó sea nómina á los arzobispados, obispados, monasterios y beneficios consistoriales, es á saber, escritos y tasados en los libros de Cámara, cuando vacan en los Reinos de las Españas, hallándose apoyado su derecho en bulas y privilegios apostólicos, y en otros títulos alegados por ellos, y no habiendo habido tampoco controversia sobre las nóminas de los Reyes Católicos á los arzobispados, obispados y beneficios que vacan en los reinos de Granada y de las Indias, ni tampoco sobre la nómina de algunos otros beneficios; se declara deber quedar la Real Corona en su pacífica posesion, de nombrar en el caso de las vacantes, como lo ha estado hasta aquí; y se conviene en que los nominados para los arzobispados, obispados, monasterios y beneficios consistoriales, deban tambien en lo futuro obtener la espedicion de sus respectivas bulas en Roma, en el mismo modo y forma practicada hasta aquí, sin innovacion alguna.

Pero habiendo sido graves las controversias sobre la nómina á los beneficios residenciales y simples que se hallan en los Reinos de las Españas, esceptuados, como se ha dicho, los que están en los reinos de Granada y de las Indias; y habiendo pretendido los Reyes Católicos el derecho de la nómina en virtud del Patronato universal, y no habiendo dejado de esponer la Santa Sede las razo-

nes que creia militaban por la libertad de los mismos beneficios, y su colacion en los meses apostólicos y casos de las reservas, y así respectivamente por la de los ordinarios en sus meses; despues de una larga disputa, se ha abrazado finalmente, de comun consentimiento, el temperamento siguiente:

La Santidad de Nuestro Beatísimo Padre, Benedicto Papa XIV, reserva á su privativa libre colacion, á sus sucesores y á la Sede Apostólica perpétuamente, cincuenta y dos beneficios, cuyos títulos serán espresados inmediatamente, para que así Su Santidad, como sus sucesores, tengan el arbitrio de poder proveer y premiar á los eclesiásticos españoles que por probidad é integridad de costumbres, ó por insigne literatura, ó por servicios hechos á la Santa Sede, se hicieren beneméritos; y la colacion de estos cincuenta y dos beneficios deberá ser siempre privativa de la Santa Sede en cualquier mes y en cualquier modo que vaquen, aun por *resulta real*, y tambien aunque alguno de ellos se hallase tocar al Real Patronato de la Corona; y aunque estuviesen sitos en diócesis donde algun Cardenal tuviese cualquiera ámplio indulto de conferir, no debiendo en manera alguna ser éste atendido en perjuicio de la Santa Sede; y las bulas de estos cincuenta y dos beneficios deberán espedirse siempre en Roma, pagándose los acostumbrados emolumentos debidos á la datería y cancillería apostólica, segun los presentes estados; y todo esto sin imposicion alguna de pension y sin exaccion de cédulas bancarias, como tambien se dirá abajo. Y los nombres de los cincuenta y dos beneficios son los siguientes:

En la catedral de Avila, el arcedianato de Arévalo.

En la de Orense, el arcedianato de Bubal.

En la de Barcelona, el priorato, antes secular y ahora regular, de la colegiata de Santa Ana.

En la de Búrgos, la maestrescolía, y el arcedianato de Palenzuela.

En la de Calahorra, el arcedianato de Nájera y la tesorería.

En la de Cartagena, la maestrescolía; y en su diócesi, el beneficio simple de Albacete.

En la catedral de Zaragoza el arciprestazgo de Daroca, y el arciprestazgo de Belchite.

En la de Ciudad-Rodrigo, la maestrescolía.

En la de Santiago, el arcedianato de la Reina; el arcedianato de San Tasia y la tesorería.

En la de Cuenca, el arcedianato de Alarcon, y la tesorería.

En la de Córdoba, el arcedianato de Castro; y en su diócesi, el beneficio simple de Belalcazar, y el préstamo de Castro y Espejo.

En la de Tortosa, la sacristía y la hospitalaria.

En la de Gerona, el arcedianato de Ampurdán.

En la de Jaen, el arcedianato de Baeza; y en su obispado, el beneficio simple de Arjonilla.

En la de Lérida, la preceptoría.

En la de Sevilla, el arcedianato de Jeréz; y en su diócesi, el beneficio simple de la Puebla de Guzman, y el préstamo de la iglesia de Santa Cruz de Ecija.

En la de Mallorca, la preceptoría, y la prepositura de San Antonio Vienense.

Nullius, en el reino de Toledo, el beneficio simple de Santa María de la ciudad de Alcalá la Real.

En el obispado de Orihuela, el beneficio simple de Santa María de Elche.

En la catedral de Huesca, la chantría.

En la de Oviedo, la chantría.

En la de Osma, la maestrescolía, y la abadía de San Bartolomé.

En la de Pamplona, la hospitalaria, antes regular, ahora encomienda, y la preceptoría general de Olite.

En la de Plasencia, el arcedianato de Medellin, y el de Trujillo.

En la de Salamanca, el arcedianato de Monleon.

En la de Sigüenza, la tesorería, y la abadía de Santa Coloma.

En la de Tarragona, el priorato.

En la de Tarazona, la tesorería.

En la de Toledo, la tesorería; y en su diócesi, el beneficio simple de Ballecas.

En la diócesi de Tuy, el beneficio simple de San Martin del Rosal.

En la catedral de Valencia, la sacristía mayor.

En la de Urgel, el arcedianato de Andorra.

En la de Zamora, el arcedianato de Toro (*).

Para reglar bien despues las colaciones, presentaciones, nóminas é instituciones de los beneficios que vacaren en adelante en los dichos reinos de las Españas, se conviene:

En primer lugar. Que los arzobispos, obispos y coladores inferiores deban continuar en lo venidero en proveer los beneficios, que proveian por lo pasado, siempre que vaquen en su meses ordinarios de Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre,

---

(*) En lugar del préstamo de Santa Cruz de Ecija se subrogó y reservó á la libre y perpétua colacion de la Santa Sede, en 1787, uno de los tres beneficios simples servideros de Santa María de Alcalá la Real. Otro beneficio simple de la misma iglesia aparece reservado ya en este concordato.

Por breve de Su Santidad, fecha 24 de Agosto de 1787, en que se estinguió la órden de canónigos reglares de San Antonio Abad en los Reinos de España, quedó secularizada perpétuamente la encomienda de San Antonio Vienense, reservada por este Concordato á la provision Apostólica.

La encomienda de Olite, quedó tambien secularizada perpétuamente en virtud del mismo breve de Estincion.

aunque se halle vacante la Silla Apostólica: y tambien que en los mismos meses, y en el mismo modo, prosigan en presentar los patronos eclesiásticos los beneficios de su patronato, esclusas las alternativas de meses, en las colaciones que antecedentemente se daban y que no se concederán jamás en adelante.

Segundo. Que las prebendas de oficio, que actualmente se proveen por oposicion y concurso abierto, se confieran y se espidan en lo venidero en el propio modo y con las mismas circunstancias que se ha practicado hasta aquí, sin la menor innovacion en cosa alguna; ni que tampoco se innove nada en órden á los beneficios de patronato laical de particulares.

Tercero. Que no solo las parroquias y beneficios curados se confieran en lo futuro, como se han conferido en lo pasado, por oposicion y concurso, cuando vaquen en los meses ordinarios; sino tambien cuando vaquen en los meses y casos de las reservas, aunque la presentacion fuese de pertenencia real; debiéndose en todos estos casos presentar al ordinario el que el patrono tuviese por mas digno entre los tres que hubiesen sido aprobados por idóneos por los examinadores sinodales *ad curam animarum*.

Cuarto. Que habiéndose ya dicho arriba que deba quedar ileso á los patronos eclesiásticos el derecho de presentar á los beneficios de sus patronatos en los cuatro meses ordinarios; y habiéndose acostumbrado hasta ahora que algunos cabildos, rectores, abades y cofradías, erigidas con autoridad eclesiástica, recurran á la Santa Sede, para que las elecciones hechas por ellas sean confirmadas con bula apostólica; no se entienda innovada cosa alguna en este caso, sino que todo quede en el pié, en que ha estado hasta aquí.

Quinto. Salva siempre la reserva de los cincuenta y dos beneficios, hecha á la libre colacion de la Santa Sede, y salvas siempre las declaraciones poco antes espresadas; Su Santidad, para concluir amigablemente todo lo restante de la gran controversia sobre el patronato universal, acuerda á la Majestad del Rey Católico y á los Reyes sus sucesores perpétuamente, el derecho universal de nombrar y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, catedrales, colegiatas y diócesis de los reinos de las Españas, que actualmente posee, á las dignidades mayores *post Pontificalem*, y otras en catedrales y dignidades principales, y otras en colegiatas, canonicatos, porciones, prebendas, abadías, prioratos, encomiendas, parroquias, personatos, patrimoniales, oficios y beneficios eclesiásticos, seculares y regulares, *cum cura et sine cura*, de cualquier naturaleza que sean, que al presente existen y que en adelante se fundaren, si los fundadores no se reservasen en sí y en sus sucesores el derecho de presentar en los dominios y reinos de las Españas, que actualmente posee el Rey Católico, con toda la generalidad con que se hallan comprendidos en los meses apostólicos y casos de las reservas, generales y especiales, y del mismo modo tambien en el caso de vacar los beneficios en los meses ordinarios, cuando vacan las sillas arzobispales y obispales, ó por cualquiera otro título.

Y á mayor abundamiento en el derecho que tenia la Santa Sede, por razon de las reservas, de conferir en los reinos de las Españas los beneficios, ó por sí, ó por medio de la Datería, Cancelaría apostólica, nuncios de España ó indultarios, subroga á la Majestad del Rey Católico y Reyes sus sucesores, dándoles el derecho universal de presentar á dichos beneficios en los reinos de las Españas, que actualmente posee, con facultad de usarle en el mismo modo que usa y ejerce lo restante del patronato perteneciente á su Real Corona; no debiéndose en lo futuro conceder á ningun Nuncio Apostólico en España, ni á ningun cardenal ú obispo en España, indulto de conferir beneficios en los meses apostólicos, sin el espreso permiso de S. M. ó de sus sucesores.

Sesto. Para que en lo venidero proceda todo con el debido sistema, y en cuanto sea posible se mantenga ilesa la autoridad de los obispos; se conviene en que todos los que se presentaren y nombraren por S. M. Católica y sus sucesores á los beneficios arriba dichos, aunque vacaren por resulta de provisiones Reales, deban recibir indistintamente las instituciones y colaciones canónicas de sus respectivos ordinarios, sin espedicion alguna de las bulas apostólicas; esceptuada la confirmacion de las elecciones, que arriba quedan espresadas, y esceptuados los casos en que los presentados y nombrados, ó por efecto de edad, ó por cualquier otro impedimento canónico, tuvieren necesidad de alguna dispensa ó gracia apostólica ó de cualquier otra cosa, superior á la autoridad ordinaria de los obispos; debiéndose en todos estos casos y otros semejantes, recurrir siempre en lo futuro á la Santa Sede, como se ha hecho por lo pasado, para obtener la gracia ó dispensacion, pagando á la Datería y Cancelaría apostólica los emolumentos acostumbrados, sin imposicion de pensiones ó exaccion de cédulas bancarias, como tambien se dirá en adelante.

Séptimo. Que para el mismo fin de mantener ilesa la autoridad ordinaria de los obispos, se conviene y se declara, que por la cesion y subrogacion en los referidos derechos de nómina, presentacion y patronato, no se entienda conferida al Rey Católico, ni á sus sucesores, jurisdiccion alguna eclesiástica sobre las iglesias comprendidas en los espresados derechos, ni tampoco sobre las personas que presentare y nombrare para las dichas iglesias y beneficios; debiendo, así estas, como las otras á quienes fueron conferidos por la Santa Sede los cincuenta y dos beneficios reservados, que-

dar sujetas á sus respectivos ordinarios, sin poder pretender exencion de su jurisdiccion; salva siempre la suprema autoridad que el Pontífice Romano, como pastor de la Iglesia universal, tiene sobre todas las iglesias y personas eclesiásticas; y salvas siempre las reales prerogativas que competen á la Corona, en consecuencia de la Real proteccion, especialmente sobre las iglesias del Real Patronato.

Octavo. Habiendo considerado S. M. Católica que, quedando la Dataría y Cancillería apostólica, por razon del Patronato y derechos concedidos á S. M. y á sus sucesores, sin las utilidades de las espediciones y annatas, seria grave el menoscabo del Erario pontificio; se obliga á hacer consignar en Roma, á título de compensacion, por una sola vez, á disposicion de Su Santidad, un capital de trescientos y diez mil escudos romanos, que á razon de un tres por ciento, producirá anualmente nueve mil y trescientos escudos de la misma moneda, en cuya cantidad se ha regulado el producto de todos los derechos arriba dichos.

Habiéndose originado en los tiempos pasados alguna controversia sobre algunas provisiones hechas por la Santa Sede, en las catedrales de Palencia y Mondoñedo; la Majestad del Rey Católico conviene en que los provistos entren en posesion despues de la ratificacion del presente *Concordato*. Y habiéndose tambien suscitado nuevamente, con motivo de la pretension del Real Patronato universal, la antigua disputa de la imposicion de pensiones y exaccion de cédulas bancarias, así como la Santidad de Nuestro Beatísimo Padre, para cortar de una vez las contiendas que de cuando en cuando se suscitaban, se habia manifestado pronto y resuelto á abolir el uso de dichas pensiones y cédulas bancarias, con el único sentimiento de que, faltando el producto de ellas, se hallaría, contra su deseo, en la necesidad de sujetar el Erario pontificio á nuevas cargas, respecto de que el producto de estas cédulas bancarias se empleaba por la mayor parte, en los salarios y gratificaciones de los ministros, que sirven á la Santa Sede en los negocios pertenecientes al gobierno universal de la Iglesia; así tambien la Majestad del Rey Católico, no menos por su heredada devocion á la Santa Sede, que por el afecto particular con que mira á la sagrada Persona de Su Beatitud, se ha allanado á dar por una sola vez un socorro, que cuando no en el todo, á lo menos en parte alivie al Erario pontificio de los gastos que está obligado á hacer para la manutencion de los espresados ministros; y así se obliga á hacer entregar en Roma seiscientos mil escudos romanos, que al tres por ciento, producen anualmente diez y ocho mil escudos de la misma moneda: con lo cual queda abolido el uso de imponer en adelante pensiones y exigir cédulas bancarias, no solo en el caso de colacion de los cincuenta y dos beneficios reservados á la Santa Sede, en el de las confirmaciones arriba espresadas de algunas elecciones, en el de recurso á la Santa Sede para obtener alguna dispensacion, concerniente á la colacion de los beneficios; sino tambien en cualquiera otro caso: de tal manera que queda para siempre estinguido en lo venidero el uso de la imposicion de las pensiones, y de la exaccion de las cédulas bancarias; pero sin perjuicio de las ya impuestas hasta el tiempo presente.

Habia tambien otro punto de disputa, no ya en órden del derecho de la Cámara apostólica y nunciatura de España sobre los espolios y frutos de las iglesias obispales, vacantes en los reinos de las Españas, sino sobre el uso, ejercicio y dependencias de dicho derecho; de modo que era necesario llegar sobre esto á alguna concordia ó composicion. Para allanar tambien estas contínuas diferencias, la Santidad de Nuestro Beatísimo Padre, derogando, anulando, y dejando sin efecto alguno todas las precedentes constituciones apostólicas, y todas las concordias y convenciones, que se han hecho hasta aquí entre la reverenda Cámara apostólica, obispos, cabildos y diócesis, y cualquiera otra cosa que sea en contrario, aplica desde el dia de la ratificacion de este *Concordato*, todos los espolios y frutos de las iglesias vacantes, exijidos y no exijidos, á los usos pios que prescriben los sagrados cánones, prometiendo que no concederá en adelante por ningun motivo, á persona alguna eclesiástica, aunque sea digna de especial ó especialísima mencion, la facultad de testar de los frutos y espolios de sus iglesias obispales, aun para usos pios; pero salvas las ya concedidas, que deberán tener efecto: concediendo á la Majestad del Rey Católico y á sus sucesores el elegir en adelante los ecónomos y colectores; pero con tal que sean personas eclesiásticas, con todas las facultades oportunas y necesarias para que, bajo de la real proteccion, sean fielmente administrados y fielmente empleados por ellos los sobredichos efectos en los espresados usos.

Y S. M., en obsequio de la Santa Sede, se obliga á hacer depositar en Roma, por una sola vez á disposicion de Su Santidad, un capital de doscientos treinta y tres mil trescientos y treinta y tres escudos romanos, que impuestos al tres por ciento, produce anualmente siete mil escudos de la propia moneda; y además de esto acuerda S. M. que se señalen en Madrid á disposicion de Su Santidad, sobre el producto de la Cruzada, cinco mil escudos anuales para la manutencion y subsistencia de los Nuncios apostólicos, y todo esto en consideracion de la compensacion del producto que pierde el Erario pontificio en la referida cesacion de los espolios y frutos de las iglesias vacantes, y de la obligacion de no conceder en adelante facultades de testar.

Su Santidad, en fé de Sumo Pontífice, y S. M.,

en palabra del Rey Católico, prometen recíprocramente, por sí mismos y en nombre de sus sucesores, la firmeza inalterable y subsistencia perpétua de todos y cada uno de los artículos precedentes; queriendo y declarando que, ni la Santa Sede, ni los Reyes Católicos hayan de pretender respectivamente mas de lo que se haya comprendido y espresado en dichos capítulos, y que se haya de tener por irrito y de ningun valor ni efecto, cuanto se hiciere en cualquiera tiempo contra todos ó alguno de los mismos artículos.

Para la validacion y observancia de cuanto se ha convenido, se firmará este *Concordato* en la forma acostumbrada; y tendrá todo su entero efecto y cumplimiento, luego que se entregaren los capitales de recompensa que van espresados, y despues que se hiciere la ratificacion (1).

En fé de lo cual, Nos los infrascriptos, en virtud de las facultades respectivas de Su Santidad, y de S. M. Católica, hemos firmado el presente *Concordato*, y sellado con nuestro propio sello. En el Palacio Apostólico de Quirinal, hoy once de Enero de mil setecientos cincuenta y tres.—(L. S.)—S. Cardenal Valenti.—(L. S.)—Manuel Ventura Figueroa.

SECCION III.

Concordato de 1851.

En el período de mas de un siglo, transcurrido desde el último Concordato, se acumulan tales acontecimientos políticos, y de tal trascendencia á los asuntos eclesiásticos, que apenas, para restablecer la armonía entre la Iglesia y el Estado, podria imparcialmente ponerse en duda la necesidad de un Concordato; y se ha puesto, sin embargo.

Los mas remarcables de estos acontecimientos empiezan con la muerte del Rey Fernando VII. Encendióse entonces la guerra civil entre la Reina Isabel II, que fué proclamada, muerto su padre, y el Infante D. Cárlos, su tio carnal.

La córte de Roma, mas ó menos inclinada á la legitimidad respectiva del derecho de uno de los contendientes, no reconoció como Soberano á ninguno de los dos: siendo el resultado no prestarse á preconizar obispos, presentados por ninguno de ellos; pues, siendo el patronato universal un derecho y prerogativa propia del legítimo Soberano de España, en el hecho de admitir presentaciones de la Reina Isabel, ó de D. Cárlos, y preconizar al presentado, se reconocia, con el patronato, la soberanía del presentante.

Era cada dia mas lamentable la orfandad de la Iglesia. El Papa se prestaba á nominar *motu propio*, prévia indicacion de la necesidad; pero la Reina no se conformaba con esa fórmula, porque era abdicar su patronato, y reconocer dudosa su legitimidad. Roma se prestaba, por último, á nombrar vicarios generales, obispos administradores de las diócesis vacantes, y algunos de estos nombramientos tuvieron lugar.

Así, despues de un período angustioso de siete años, llegaron las cosas al convenio de Vergara, en virtud del que la Reina Isabel II continuó reinando sin contienda; pero el reconocimiento de su Soberanía se hizo aun esperar algunos años por parte de varios Estados, entre ellos la córte de Roma.

Ya, al terminar la guerra, habian ocurrido hechos en el órden eclesiástico, que agregados á la política y convicciones de cada córte, dificultaban el reconocimiento: hechos que fueron en aumento, dificultándolo mas y mas. Tales son, entre otros, la supresion de las comunidades religiosas, y exclaustracion general: la venta de sus bienes, como bienes nacionales (véase COMUNIDADES RELIGIOSAS); la supresion del diezmo, y la desamortizacion y venta, tambien de los bienes del clero secular.

Al fin, pasados algunos años, tuvo lugar el reconocimiento de la Reina y se pudo enviar embajador á Roma. Empezaron desde luego las reclamaciones de reparacion y las promesas de acomodamiento; y en 1847, se formuló un Concordato, no ratificado por la Corona, y del que hemos hecho mencion.

Pero urgia el arreglo; y no poco en España la *sanacion* por las compras de bienes de la Iglesia, sin la cual, aun prescindiendo de razones de otro órden, los mencionados bienes sufrian depreciacion en la segunda y ulteriores ventas á particulares, y aun en la primera venta por el Estado. Cierto que estas

(1) Este Concordato fué ratificado por el Rey Católico en 31 de Enero, año de su fecha; y por Su Santidad en 20 de Febrero del mismo.

cuestiones, y aun otras graves y difíciles podrian haberse arreglado por cambio de notas, concesiones y breves pontificios; pero siempre sin la garantía de perpetuidad, que ofrece un Concordato; y mas en los cambios de la política, é instabilidad de los ministerios. Tal era la apreciacion de las partes interesadas, entre las que hay que contar al Estado y la opinion imparcial de personas ilustradas. Pensóse, pues, en la continuacion de negociaciones para Concordato.

Sustituyóse nuestra representacion en Roma, y se mandó con el carácter de embajador á D. Joaquin Francisco Pacheco, con ámplias facultades. En virtud de ellas, por cambio de notas, aceptó y concertó preliminarmente con la Santa Sede, las declaraciones que hoy forman los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851.

La política ocasionó un cambio de Gabinete, y el expresado embajador dió su dimision. El nuevo Gobierno calculó que el éxito se facilitaba y aseguraba, trasladando las negociaciones á Madrid, y así lo propuso á Su Santidad, rogando que al efecto mandase un Nuncio autorizado á nuestra córte.

La de Roma exigió para ello que el nuevo Gabinete se comprometiese á incorporar al Concordato, que se ajustase, los mencionados cuatro artículos preliminares, y á publicarlos préviamente, como se realizó por separado. Todo allanado, en Agosto de 1848 se presentó en Madrid con plenos poderes el Nuncio, Monseñor D. Juan Brunelli, arzobispo de Tesalónica.

De comun acuerdo, se nombró por el Nuncio y por el Gobierno de S. M. una comision de personas competentes y calificadas, que formulasen el Concordato, tan estenso, como lo aconsejaba el estado de las cosas en España. Componíanla, por parte del Gobierno, los Sres. D. Manuel Joaquin Tarancon, obispo de Zamora y luego arzobispo de Sevilla y Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Don Ventura Gonzalez Romero, y D. Manuel de Seijas Lozano: por la del Nuncio, el Sr. Costa y Borrás, obispo de Barcelona, el señor Juantorena, asesor de la Nunciatura y otro eclesiástico.

Presentado el proyecto, empezó la negociacion, entendiéndose con el Nuncio el marqués de Pidal, Ministro de Estado, y D. Lorenzo Arrazola, Ministro de Gracia y Justicia.

Cerca de dos años duró la trabajosa negociacion, y cuando en 14 de Enero de 1851 llegaba la aprobacion de Roma, en el mismo dia el Ministerio que lo habia ajustado, fué reemplazado por otro, de que eran Ministro de Estado D. Manuel Beltran de Lis, y de Gracia y Justicia D. Ventura Gonzalez Romero.

Con esta ocasion, se introdujeron en el Concordato dos modificaciones: una relativa á los bienes de las monjas, segun la que se devolverian á las mismas los todavía no vendidos, debiendo luego conmutarlos en títulos de la deuda: la otra referente á las Ordenes militares. Segun el primer texto, en representacion de las poblaciones dispersas de aquellas, se creaba un obispado, que se llamaria de las Ordenes militares y cuya capital seria Ciudad-Real, turnando las cuatro Ordenes en la presentacion de obispo: segun la modificacion, en vez de obispado, se formaria un *Coto redondo*, con el carácter de priorato, cuya capital seria tambien Ciudad-Real.

Así aprobado, se publicó el Concordato en 16 de Marzo de 1851, firmando como plenipotenciarios, Monseñor Brunelli y D. Manuel Beltran de Lis.

Para formalizar este acuerdo con la Santa Sede, habia sido autorizado el Gobierno, por ley de 8 de Mayo de 1849. Por eso, presentado el Concordato á las Córtes, y aprobado, fué publicado como ley en 17 de Octubre de 1851. Véase en la *Coleccion legislativa*, y el Breve Pontificio de confirmacion y publicacion, tomo 54, fólio 259: y ahora á continuacion su texto:

Concordato de 1851.

«Art. 1.° La religion Católica, apostólica, romana, que con exclusion de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nacion española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerogativas de que debe gozar, segun la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. 2.° En su consecuencia la instruccion en las Universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas de cualquiera clase, será en todo conforme á la doctrina de la misma religion Católica; y á este fin no se pondrá impedimento alguno á los obispos y demás prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fé, y de las costumbres, y sobre la educacion religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Art. 3.° Tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos prelados, ni á los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningun pretexto, en cuanto se refiera al cumplimiente de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideracion debidos, segun los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio. S. M. y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los obispos, en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los hombres, que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de impedirse la publicacion, introduccion ó circulacion de libros malos y nocivos.

Art. 4.° En todas las demás cosas, que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos, gozará de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.

Art. 5.° En atencion á las poderosas razones de necesidad y conveniencia, que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva division y circunscripcion de diócesis en toda la Península é islas adyacentes. Y al efecto se conservarán las actuales sillas metropolitanas de Toledo, Búrgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y se elevará á esta clase la sufragánea de Valladolid.

Asimismo se conservarán las diócesis sufragáneas de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaen, Jaca, Leon, Lérida, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Zamora.

La diócesi de Albarracin quedará unida á la de Teruel: la de Barbastro á la de Huesca: la de Ceuta á la de Cádiz: la de Ciudad-Rodrigo á la de Salamanca: la de Ibiza á la de Mallorca: la de Solsona á la de Vich: la de Tenerife á la de Canarias; y la de Tudela á la de Pamplona.

Los prelados de las sillas, á que se reunen otras, añadirán al título de obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que se les une.

Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad-Real, Madrid, y Vitoria.

La silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará á Logroño; la de Orihuela á Alicante, y la de Segorbe á Castellon de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oidos los respectivos prelados y cabildos.

En los casos, en que para el mejor servicio de alguna diócesi, sea necesario un obispo auxiliar, se procederá á esta necesidad en la forma canónica acostumbrada.

De la misma manera se establecerán vicarios generales en los puntos, en que, con motivo de la agregacion de diócesis prevenida en este artículo, ó por otra justa causa, se creyeren necesarios, oyendo á los respectivos prelados.

En Ceuta y Tenerife se establecerán desde luego obispos auxiliares.

Art. 6.° La distribucion de las diócesis referidas, en cuanto á la dependencia de sus respectivas metropolitanas, se hará como sigue:

Serán sufragáneas de la iglesia metropolitana de Búrgos las de Calahorra ó Logroño, Leon, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.

De la de Granada, las de Almería, Cartagena ó Murcia, Guadix, Jaen y Málaga.

De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.

De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba é islas Canarias.

De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich.

De la de Toledo, las de Ciudad-Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza.

De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela ó Alicante y Segorbe ó Castellon de la Plana.

De la de Valladolid, las de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia y Zamora.

De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Teruel.

Art. 7.° Los nuevos límites y demarcacion particular de las mencionadas diócesis se determinarán con la posible brevedad y del modo debido (*servatis servandis*) por la Santa Sede, á cuyo efecto delegará en el Nuncio apostólico en estos Reinos las facultades necesarias para llevar á cabo la expresada demarcacion, entendiéndose para ello (*collatis consiliis*) con el Gobierno de S. M.

Art. 8.° Todos los RR. obispos y sus iglesias reconocerán la dependencia canónica de los respectivos metropolitanos, y en su virtud cesarán las exenciones de los obispados de Leon y Oviedo.

Art. 9.° Siendo por una parte necesario y urgente acudir con el oportuno remedio á los graves inconvenientes, que produce en la administracion eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo por otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una institucion, que tantos servicios ha hecho á la Iglesia y al Estado, y las prerogativas de los Reyes de España, como Grandes Maestres de las expresadas Ordenes por concesion apostólica, se designará en la nueva demarcacion eclesiástica un determinado, número de pueblos, que formen *coto redondo* para que ejerza en él, como hasta aquí, el Gran Maestre la jurisdiccion eclesiástica, con entero arreglo á la expresada concesion y bulas pontificias.

El nuevo territorio se titulará *Priorato de las Ordenes militares*, y el prior tendrá el carácter episcopal, con título de Iglesia *in partibus*.

Los pueblos que actualmente pertenecen á dichas Ordenes militares, y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán á las diócesis respectivas.

Art. 10. Los M. RR. arzobispos y RR. obispos extenderán el ejercicio de su autoridad y jurisdiccion ordinaria á todo el territorio, que en la nueva circunscripcion quede comprendido en sus respectivas diócesis; y por consiguiente los que hasta ahora, por cualquier título, la ejercian en distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella.

Art. 11. Cesarán tambien todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, cualesquiera que sean su clase y denominacion, inclusa la de San Juan de Jerusalen. Sus actuales territorios se reunirán á las respectivas diócesis en la nueva demarcacion que se hará de ellas, segun el art. 7.°, salvas las exenciones siguientes:

1.° La del pro-capellan mayor de S. M.

2.° La castrense.

3.° La de las cuatro Ordenes militares, de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, en los términos prefijados en el art. 9.° de este Concordato.

4.° La de los prelados regulares.

5.° La del Nuncio apostólico, *pro tempore*, en la iglesia y hospital de Italianos de esta corte.

Se conservarán tambien las facultades especiales, que corresponden á la Comisaría general de Cruzada, en cosas de su cargo, en virtud del Breve de delegacion y otras disposiciones apostólicas.

Art. 12. Se suprime la Colecturía general de Espolios, Vacantes y Anualidades, quedando por ahora unida á la Comisaría general de Cruzada la comision para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos, y sustanciar y terminar los negocios pendientes.

Queda asimismo suprimido el Tribunal Apostólico y Real de la Gracia del Excusado.

Art. 13. El cabildo de las iglesias catedrales se compondrá del dean, que será siempre la primera silla *post pontificalem*; de cuatro dignidades, á saber: la de arcipreste, la de arcediano, la de chantre y la de maestrescuela, y además de la de tesorero en las iglesias metropolitanas; de cuatro canónigos de oficio, á saber: el magistral, el doctoral, el lectoral y el penitenciario, y del número de canónigos de gracia que se expresan en el art. 17.

Habrá además en la iglesia de Toledo otras dos dignidades, con los títulos respectivos de capellan mayor de Reyes y capellan de Muzárabes: en la de Sevilla la dignidad de capellan mayor de San Fernando: en la de Granada la de capellan mayor de los Reyes Católicos: y en la de Oviedo la de abad de Covadonga.

Todos los individuos del cabildo tendrán en él igual voz y voto.

Art. 14. Los prelados podrán convocar el cabildo y presidirlo, cuando lo crean conveniente: del mismo modo podrán presidir los ejercicios de oposicion á prebendas.

En estos y en cualesquiera otros actos, los prelados tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste ningun privilegio ni costumbre en contrario; y se les tributarán todos los homenajes de consideracion y respeto, que se deben á su sagrado carácter y á su cualidad de cabeza de su iglesia y cabildo.

Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asuntos, que no les sean directamente personales, y su voto además será decisivo en caso de empate.

En toda eleccion ó nombramiento de personas, que corresponda al cabildo, tendrá el prelado tres, cuatro ó cinco votos, segun que el número de los capitulares sea de diez y seis, veinte, ó mayor de veinte. En estos casos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una comision de él á recibir sus votos.

Cuando el prelado no presida el cabildo, lo presidirá el dean.

Art. 15. Siendo los cabildos catedrales el senado y consejo de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, serán consultados por éstos para oir su dictámen ó para obtener su consentimiento, en los términos en que, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido por el derecho canónico, y especialmente por el Sagrado Concilio de Trento. Cesará por consiguiente desde luego toda inmunidad, exencion, privilegio, uso ó abuso, que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España, en favor de los mismos cabildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados.

Art. 16. Además de los dignidades y canónigos que componen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales beneficiados ó cape-

llanes asistentes, con el correspondiente número de otros ministros y dependientes.

Así los dignidades y canónigos, como los beneficiados y capellanes, aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen divididos en presbiterales, diaconales y sub-diaconales, deberán ser todos presbíteros, segun lo dispuesto por Su Santidad; y los que no lo fueren al tomar posesion de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro del año, bajo las penas canónicas.

Art. 17. El número de capitulares y beneficiados en las iglesias metropolitanas será el siguiente:

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán veinte y ocho capitulares, y veinte y cuatro beneficiados la de Toledo, veinte y dos la de Sevilla y veinte y ocho la de Zaragoza.

Las de Tarragona, Valencia y Santiago veinte y seis capitulares y veinte beneficiados, y las de Búrgos, Granada y Valladolid veinte y cuatro capitulares y veinte beneficiados.

Las iglesias sufragáneas tendrán respectivamente el número de capitulares y beneficiados que se espresa á continuacion:

Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, Leon, Málaga y Oviedo tendrán veinte capitulares y diez y seis beneficiados: las de Badajoz, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Jaen, Lugo, Palencia, Pamplona, Salamanca y Santander diez y ocho capitulares y catorce beneficiados: las de Almería, Astorga, Avila, Canarias, Ciudad-Real, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, Jaca, Lérida, Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, Vitoria y Zamora, diez y seis capitulares y doce beneficiados.

La de Madrid tendrá veinte capitulares y veinte beneficiados, y la de Menorca doce capitulares y diez beneficiados.

Art. 18. En subrogacion de los cincuenta y dos beneficios, espresados en el Concordato de 1753, se reservan á la libre provision de Su Santidad, la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad-Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaen, Lugo, Málaga, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Tuy, Vitoria y Zamora; y en las demás sufragáneas una canongía de las de gracia, que quedará determinada por la primera provision que haga Su Santidad. Estos beneficios se conferirán con arreglo al mismo Concordato.

La dignidad de dean se proveerá siempre por S. M. en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vaque. Las canongías *de oficio* se proveerán, prévia oposicion, por los prelados y cabildos. Las demás dignidades y canongías se proveerán en rigorosa alternativa por S. M. y los respectivos arzobispos y obispos. Los beneficiados ó capellanes asistentes se nombrarán alternativamente por S. M. y los prelados y cabildos.

Las prebendas, canongías y beneficios espresados, que resulten vacantes por *resigna* ó por promocion del poseedor á otro beneficio, no siendo de los reservados á Su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por S. M.

Asimismo lo serán los que vaquen, *sede vacante*, ó los que hayan dejado sin proveer los prelados, á quienes correspondia proveerlos al tiempo de su muerte, traslacion ó renuncia.

Corresponderá asimismo á S. M. la primera provision de las dignidades, canongías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que se aumenten en la nueva metropolitana de Valladolid, á escepcion de las reservadas á Su Santidad y de las canongías de oficio, que se proveerán como de ordinario.

En todo caso los nombrados para los espresados beneficios deberán recibir la institucion y colacion canónicas de sus respectivos ordinarios.

Art. 19. En atencion á que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes, como por razon de las disposiciones del presente Concordato, han variado notablemente las circunstancias del clero español, Su Santidad por su parte y S. M. la Reina por la suya convienen en que no se conferirá ninguna dignidad, canongía ó beneficio de los que exigen personal residencia, á los que, por razon de cualquier otro cargo ó comision estén obligados á residir contínuamento en otra parte. Tampoco se conferirá á los que estén en posesion de algun beneficio de la clase indicada, ninguno de aquellos cargos ó comisiones, á no ser que renuncien uno de dichos cargos ó beneficios, los cuales se declaran por consecuencia de todo punto incompatibles.

En la Capilla Real, sin embargo, podrá haber hasta seis prebendados de las iglesias catedrales de la Península; pero en ningun caso podrán ser nombrados los que ocupan las primeras sillas, los canónigos de oficio, los que tienen cura de almas, ni dos de una misma iglesia.

Respecto de los que en la actualidad, y en virtud de indultos especiales ó generales, se hallen en posesion de dos ó mas de estos beneficios, cargos ó comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias para arreglar su situacion á lo prevenido en el presente artículo, segun las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos.

Art. 20. En Sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana ó sufragánea, en el término marcado y con arreglo á lo que previene el Sagrado Concilio de Trento, nombrará un solo vicario capitular, en cuya persona se refundirá toda la potestad ordinaria del cabildo, sin reserva ó limitacion alguna por parte de él, y sin que pueda re-

vocar el nombramiento, una vez hecho, ni hacer otro nuevo; quedando por consiguiente enteramente abolido todo privilegio, uso ó costumbre de administrar en cuerpo, de nombrar mas de un vicario ó cualquiera otro, que bajo cualquier concepto sea contrario á lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. 21. Además de la capilla del Real Palacio se conservarán:

1.° La de Reyes y la Muzárabe de Toledo, las de San Fernando de Sevilla, y de los Reyes Católicos de Granada.

2.° Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde no exista silla episcopal.

3.° Las de patronato particular, cuyos patronos aseguren el esceso de gasto, que ocasionará la colegiata sobre el de iglesia parroquial.

4.° Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de Leon, Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera.

5.° Las catedrales de las sillas episcopales, que se agreguen á otras en virtud de las disposiciones del presente Concordato, se conservarán como colegiatas.

Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y fundacion, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo impidan, á iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que, además del párroco, se contemplen necesarios, tanto para el servicio parroquial, como para el decoro del culto.

La conservacion de las capillas y colegiatas espresadas deberá entenderse siempre con sujecion al prelado de la diócesi á que pertenezcan, y con derogacion de toda esencion y jurisdiccion *veré* ó *quasi nullius*, que limite en lo mas mínimo la nativa del ordinario.

Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor, si en el pueblo hubiese otra ú otras.

Art. 22. El cabildo de las colegiatas se compondrá de un abad presidente, que tendrá aneja la cura de almas, sin mas autoridad ó jurisdiccion que la directiva y económica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de oficio con los títulos de magistral y doctoral, y de ocho canónigos de gracia. Habrá además seis beneficiados ó capellanes asistentes.

Art. 23. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así para la provision de las prebendas y beneficios ó capellanías de las iglesias catedrales, como para el régimen de sus cabildos, se observarán puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas.

Art. 24. A fin de que en todos los pueblos del reino se atienda con el esmero debido al culto religioso y á todas las necesidades del pasto espiritual, los muy RR. arzobispos y RR. obispos procederán desde luego á formar un nuevo arreglo y demarcacion parroquial de sus respectivas diócesis, teniendo en cuenta la estension y naturaleza del territorio y de la poblacion y las demás circunstancias locales, oyendo á los cabildos catedrales, á los respectivos arciprestes y á los fiscales de los tribunales eclesiásticos, y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias, á fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecucion el precitado arreglo, prévio el acuerdo del Gobierno de S. M., en el menor término posible.

Art. 25. Ningun cabildo ni corporacion eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los curatos y vicarías perpétuas que antes estaban unidas *pleno jure* á alguna corporacion, quedarán en todo sujetas al derecho comun. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas ó iglesias no parroquiales, dependerán del cura propio de su respectivo territorio, y estarán subordinados á él en todo lo tocante al culto y funciones religiosas.

Art. 26. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en concurso abierto, con arreglo á lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, formando los ordinarios ternas de los opositores aprobados, y dirigiéndolas á S. M. para que nombre entre los propuestos. Cesará por consiguiente el privilegio de patrimonialidad y la esclusiva ó preferencia que en algunas partes tenian los patrimoniales para la obtencion de curatos y otros beneficios.

Los curatos de patronato eclesiástico se proveerán nombrando el patrono entre los de la terna, que del modo ya dicho formen los prelados; y los de patronato laical nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesi respectiva, señalándose á los que no se hallen en este caso el término de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejercicios, hechos en la forma indicada, salvo siempre el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono si lo estima conveniente.

Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los ordinarios, prévio exámen sinodal.

Art. 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios ó cargos que hubieren de suprimirse á consecuencia de lo que en él se determina.

Art. 28. El Gobierno de S. M. Católica, sin perjuicio de establecer oportunamente, prévio acuerdo con la Santa Sede y tan pronto como las circunstancias lo permitan, seminarios generales, en que se dé la estension conveniente á los estu-

dios eclesiásticos, adoptará por su parte las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis, donde no se hallen establecidos, á fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles iglesia alguna que no tenga, al menos, un seminario suficiente para la instruccion del clero.

Serán admitidos en los seminarios y educados é instruidos del modo que establece el Sagrado Concilio de Trento, los jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen conveniente recibir, segun la necesidad ó utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los seminarios, á la enseñanza y á la administracion de sus bienes, se observarán los decretos del mismo Concilio de Trento.

Si de resultas de la nueva circunscripcion de diócesis quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital actual del obispado y otro en la que se le ha de unir, se conservarán ámbos, mientras el Gobierno y los prelados de comun acuerdo los consideren útiles.

Art. 29. A fin de que en toda la península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos, de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar á los párrocos, asistir á los enfermos, y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo préviamente á los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paul, San Felipe Neri y otra órden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán, al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

Art. 30. Para que haya tambien casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocacion las que sean llamadas á la vida contemplativa y á la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones, tan piadosas como útiles á los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajo la direccion de los clérigos de San Vicente de Paul, procurando el Gobierno su fomento.

Tambien se conservarán las casas de religiosas, que á la vida contemplativa reunan la educacion y enseñanza de niñas ú otras obras de caridad.

Respecto á las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas, en que convenga la admision y profesion de novicias y los ejercicios de enseñanza ó de caridad, que sea conveniente establecer en ellas.

No se procederá á la profesion de ninguna religiosa, sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma.

Art. 31. La dotacion del M. R. arzobispo de Toledo será de 160,000 rs. anuales.

La de los de Sevilla y Valencia de 150,000.

La de los de Granada y Santiago de 140,000.

Y la de los de Búrgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza de 130,000.

La dotacion de los RR. obispos de Barcelona y Madrid será de 110,000 rs.

La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100,000.

La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaen, Leon, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora de 90,000 rs.

La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad-Real, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Vitoria de 80,000 rs.

La del patriarca de las Indias, no siendo arzobispo ú obispo propio, de 150,000, deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que, por via de pension eclesiástica ó en otro concepto, percibiese del Estado.

Los prelados, que sean cardenales, disfrutarán de 20,000 rs. sobre su dotacion.

Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el prior de las órdenes, tendrán 40,000 rs. anuales.

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno, ni por razon del coste de las bulas, que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos, que por estas puedan ocurrir en España.

Además los arzobispos y obispos conservarán sus palacios y los jardines, huertas ó casas que en cualquiera parte de la diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo, y no hubiesen sido enajenadas.

Queda derogada la actual legislacion, relativa á los espolios de los arzobispos y obispos, y en su consecuencia podrán disponer libremente, segun les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su fallecimiento, sucediéndoles *ab-intestato* los herederos legítimos, con la misma obligacion de conciencia: exceptúanse en uno y otro caso los ornamentos y pontificales, que se considerarán como propiedad de la mitra, y pasarán á sus sucesores en ella.

Art. 32. La primera silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá de dotacion 24,000 rs., las de las demás iglesias metropolitanas 20,000, las de las iglesias sufragáneas 18,000, y las de las colegiatas 15,000.

Los dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas tendrán 16,000 rs., los de las sufragáneas 14,000, y los canónigos de oficio de las colegiatas 8,000.

Los demás canónigos tendrán 14,000 rs. en las iglesias metropolitanas, 12,000 en las sufragáneas, y 6,600 en las colegiatas.

Los beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas tendrán 8,000 rs.; 6,000 los de las sufragáneas, y 3,000 los de las colegiatas.

Art. 33. La dotacion de los curas, en las parroquias urbanas será de 3,000 á 10,000 rs.: en las parroquias rurales el *minimum* de la dotacion será de 2,200.

Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000 á 4,000 rs.

Además los curas propios, y en su caso los coadjutores, disfrutarán las casas destinadas á su habitacion y los huertos ó heredades que no se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominacion de iglesarios, *mansos* ú otras.

Tambien disfrutarán los curas propios y sus coadjutores la parte que les corresponda en los derechos de estola y pié de altar.

Art. 34. Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias metropolitanas anualmente de 90 á 140,000 rs., las sufragáneas de 70 á 90,000, y las colegiatas de 20 á 30,000.

Para los gastos de administracion y estraordinarios de visita tendrán de 20 á 30,000 rs. los metropolitanos, y de 16 á 20,000 los sufragáneos.

Para los gastos del cura parroquial se asignará á las iglesias respectivas una cantidad anual, que no bajará de 1,000 rs., además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados ó se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis.

Art. 35. Los seminarios conciliares tendrán de 90 á 120,000 rs. anuales, segun sus circunstancias y necesidades.

El Gobierno de S. M. proveerá por los medios mas conducentes á la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el artículo 29.

En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas, se observará lo dispuesto en el artículo 30.

Se devolverán desde luego y sin demora á las mismas, y en su representacion á los prelados diocesanos, en cuyo territorio se hallen los conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia, que están en poder del Gobierno, y que no han sido enajenados. Pero teniendo Su Santidad en consideracion el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenderse con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los espresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con intervencion de persona nombrada por el Gobierno de S. M. El producto de estas ventas se convertirá en inscripciones intrasferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital é intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos, en proporcion de sus necesidades y circunstancias, para atender á los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho á percibirlas, sin perjuicio de que el Gobierno supla, como hasta aquí, lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones, hasta el fallecimiento de las pensionadas.

Art. 36. Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero, se entenderán sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algun caso particular alguna de las asignaciones espresadas en el artículo 34, el Gobierno de S. M. proveerá lo conveniente al efecto: del mismo modo proveerá á los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto.

Art. 37. El importe de la renta que se devengue en la vacante de las sillas episcopales, deducidos los emolumentos del ecónomo, que se diputará por el cabildo en el acto de elegir al vicario capitular, y los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por iguales partes en beneficio del seminario conciliar y del nuevo prelado.

Asimismo de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canongías, parroquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las respectivas cargas, se formará un cúmulo ó fondo de reserva, á disposicion del ordinario, para atender á los gastos estraordinarios é imprevistos de las iglesias y del clero, como tambien á las necesidades graves y urgentes de la diócesis. Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente á la duodécima parte de su dotacion anual, que satisfarán por una vez, dentro del primer año, los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios; debiendo por tanto cesar todo otro descuento que por cualquier concepto, uso, disposicion ó privilegio se hiciese anteriormente.

Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dotacion del culto y del clero serán:

1.° El producto de los bienes devueltos al clero por la ley de 3 de Abril de 1845.

2.° El producto de las limosnas de la Santa Cruzada.

3.° Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares, vacantes y que vacaren.

4.° Una imposicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria, en la cuota que sea necesario para completar la dotacion, to-

mando en cuenta los productos espresados en los párrafos 1.°, 2.° y 3.° y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen á este objeto.

El clero recaudará esta imposicion, percibiéndola en frutos, en especie ó en dinero, prévio concierto que podrá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias ó con los particulares, y en los casos necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposicion, aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones.

Además se devolverán á la Iglesia desde luego y sin demora todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la espresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, inclusos los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo.

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos, entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas, aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas, que pesaren sobre los bienes eclesiásticos, que han sido enajenados con este gravámen.

El Gobierno responderá siempre y esclusivamente de las impuestas sobre los bienes que se hubieren vendido por el Estado, libres de esta obligacion.

Art. 40. Se declara que todos los espresados bienes y rentas pertenecen en propiedad á la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero.

Los fondos de Cruzada se administrarán en cada diócesi por los prelados diocesanos, como revestidos al efecto de las facultades de la bula, para aplicarlos, segun está prevenido en la última próroga de la relativa concesion apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo, por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá verificarse dicha administracion, se fijará de acuerdo entre el Santo Padre y S. M. Católica.

Igualmente administrarán los prelados diocesanos los fondos del indulto cuadragesimal, aplicándolos á establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las diócesis respectivas, con arreglo á las concesiones apostólicas.

Las demás facultades apostólicas relativas á este ramo y las atribuciones á ellas consiguientes, se ejercerán por el arzobispo de Toledo en la estension y forma que se determinará por la Santa Sede.

Art. 41. Además la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad, en todo lo que pesee ahora, ó adquiriere en adelante, será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto á las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas no podrá hacerse ninguna supresion ó union, sin la intervencion de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen á los obispos, segun el Santo Concilio de Trento.

Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar á la Religion de este convenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. Católica, y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles, á la sazon vigentes, y estén en posesion de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningun tiempo ni manera por Su Santidad, ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; antes bien, así ellos, como sus causa-habientes, disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y productos.

Art. 43. Todo lo demás perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado segun la disciplina de la Iglesia, canónicamente vigente.

Art. 44. El Santo Padre y S. M. Católica declaran quedar salvas é ilesas las reales prerogativas de la Corona de España, en conformidad á los convenios anteriormente celebrados entre ámbas potestades. Y por tanto, los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el Sumo Pontífice Benedicto XIV y el Rey Católico Fernando VI, en el año 1753, se declaran confirmados y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se altere ó modifique por el presente.

Art. 45. En virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo, como ley del Estado, en los propios dominios. Y por tanto, una y otra de las partes contratantes prometen por *sí* y sus sucesores

la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. Católica se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.

Art. 46 y último. El cange de las ratificaciones del presente Concordato se verificará en el término de dos meses, ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual Nos, los infrascritos plenipotenciarios, hemos firmado el presente Concordato, y selládolo con nuestro propio sello, en Madrid, á 16 de Marzo de 1851.—(Firmado).—MANUEL BERTRAN DE LIS.—Lugar del sello.»

NOTA. En el texto latino se halla además, como no podia menos, la forma:—*Joannes Brunelli, Archiepiscopus, Thessalonicensis.—Loco sigilli.*

SECCION IV.

Concordato, ó convenio adicional de 1859.

Con todas las formalidades diplomáticas de un Concordato, se ajustó el presente, que sin embargo se denominó *Convenio*, como antes, y en el artículo anterior queda espuesto; siendo plenipotenciarios, por la córte de Roma, el Cardenal Antonelli, y por la de España, D. Antonio Rios y Rosas. Tuvo por objeto principal la conmutacion de los bienes del clero, de todas clases, en inscripciones intransferibles de la Deuda pública, y para representar, por inscripciones tambien, la dotacion del culto y clero, conviniendo en ello los respectivos diocesanos, reservando á la Iglesia el derecho de adquirir, al tenor del artículo 41 del Concordato de 1851, sin que se impute en su dotacion el importe de los bienes, que pudiera adquirir en lo sucesivo.

Ajustado tambien este Convenio por autorizacion legislativa al Gobierno, por ley de 4 de Enero de 1859, dada cuenta á las Córtes en su dia, se publicó como ley, en 4 de Abril de 1860. Véase en la *Coleccion legislativa*, y hé aquí su testo:

Concordato de 1859.

«Artículo 1.° El Gobierno de Su Majestad Católica, habida consideracion á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos, en diversas épocas, y deseando asegurar á la Iglesia perpétuamente la pacífica posesion de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato, celebrado en 16 de Marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutacion ni otra especie de enagenacion de los dichos bienes, sin la necesaria autorizacion de la misma Santa Sede.

Art. 2.° Queriendo llevar definitivamente á efecto de un modo seguro, estable é independiente, el plan de dotacion del culto y clero, prescrito en el mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Católica convienen en los puntos siguientes.

Art. 3.° Primeramente, el Gobierno de su Majestad reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad, y sin limitacion ni reserva, toda especie de bienes y valores; quedando en consecuencia derogada por este Convenio cualquiera disposicion que le sea contraria, y señaladamente, y en cuanto se le oponga, la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia, no se computarán en la dotacion que le está asignada por el Concordato.

Art. 4.° En virtud del mismo derecho, el Gobierno de Su Majestad reconoce á la Iglesia, como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero habida consideracion al estado de deterioro de la mayor parte de los que aun no han sido enagenados, á su difícil administracion, y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotacion del clero incierta y aun incóngrua; el Gobierno de Su Majestad ha propuesto á la Santa Sede una permutacion, dándose á los obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia, situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquél, en cambio de todos ellos y mediante su cesion hecha al Estado, tantas inscripciones intrasferibles del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.

Art. 5.° La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente á efecto una dotacion cierta, segura é independiente para el culto y para el clero, oidos los obispos de España, y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutacion se realice en la forma siguiente:

Art. 6.° Serán eximidos de la permutacion y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada diócesis, todos los bienes enumerados en los arts. 31 y 33 del Concordato de 1851, á saber: los huertos, jardines, palacios y otros edificios, que en cual-

quier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos. Tambien se le reservarán las casas destinadas á la habitacion de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de *iglesarios*, *mansos* y otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares, con sus anejos, y las bibliotecas y casas de correccion ó cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el dia para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitacion del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen á tales objetos.

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotacion prescrita para el culto y clero en el Concordato.

En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce á la Santa Sede á admitir la expresada permutacion de valores, si en alguna diócesi estimare el obispo que, por particulares circunstancias, conviene á la Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutacion, imputándose el importe de su renta en la dotacion del clero.

Art. 7.° Hecha por los obispos la estimacion de los bienes sujetos á la permutacion, se entregarán inmediatamente á aquellos títulos ó inscripciones intrasferibles, así por el completo valor de los mismos bienes, como por el valor venal de los que han sido enagenados despues del Concordato. Verificada la entrega, los obispos, competentemente autorizados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesion de todos los bienes que, con arreglo á este Convenio, están sujetos á la permutacion.

Las inscripciones se imputarán al clero como parte integrante de su dotacion, y los respectivos diocesanos aplicarán sus réditos á cubrirla en el modo prescrito en el Concordato.

Art. 8.° Atendida la perentoriedad de las necesidades del clero, el Gobierno de Su Majestad se obliga á pagar mensualmente la renta consolidada, correspondiente á cada diócesi.

Art. 9.° En el caso de que, por disposicion de la autoridad temporal, la renta del 3 por 100 de la Deuda pública del Estado llegue á sufrir cualquiera diminucion ó reduccion, el Gobierno de Su Majestad se obliga desde ahora á dar á la Iglesia tantas inscripciones intrasferibles de la renta que se sustituya á la del 3 por 100, cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente el importe anual de la que va á emitirse en favor de la Iglesia; de modo que esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningun tiempo.

Art. 10.° Los bienes pertenecientes á capellanías colativas y á otras semejantes fundaciones piadosas familiares, que á causa de su peculiar índole y destino y de los diferentes derechos que en ellos radican, no pueden comprenderse en la permutacion y cesion de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y Su Majestad Católica.

Art. 11.° El Gobierno de Su Majestad, confirmando lo estipulado en el art. 39 del Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que de comun acuerdo se convenga, por razon de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada, que guarde la posible proporcion con las mismas cargas. Tambien se compromete á cumplir por su parte, en términos hábiles, las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho artículo.

Se instituirá una comision mixta, con el carácter de consultiva, que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este artículo, y proponga la cantidad alzada que en razon de ellas ha de satisfacer el Estado.

Art. 12.° Los obispos, en conformidad de lo dispuesto en el art. 35 del Concordato, distribuirán entre los conventos de monjas, existentes en sus respectivas diócesis, las inscripciones intrasferibles, correspondientes, ya á los bienes de su propiedad que ahora se cedan al Estado, ya á los de la misma procedencia que se hubieran vendido en virtud de dicho Concordato, ó de la ley de 1.° de Mayo de 1855. La renta de estas inscripciones se imputará á dichos conventos como parte de su dotacion.

Art. 13.° Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los religiosos de ambos sexos, como tambien cuanto se prescribe en los artículos 35 y 36 del mismo, acerca del mantenimiento de las casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la reparacion de los templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga ademas á construir á sus espensas las iglesias que se consideren necesarias, á conceder pensiones á los pocos religiosos existentes legos exclaustrados, y á proveer á la dotacion de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis.

Art. 14.° La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dotacion, se destinará esclusivamente en adelante á los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesan sobre aquella por convenios celebrados con la Santa Sede.

El importe anual de la misma renta se computará por el año comun del último quinquenio en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

El Estado suplirá, como hasta aquí, la cantidad que falte para cubrir la asignacion concedida al culto por el art. 34 del Concordato.

Art. 15.° Se declara propiedad de la Iglesia la imposicion anual, que, para completar su dotacion, se estableció en el párrafo cuarto del art. 38 del Concordato, y se repartirá y cobrará dicha imposicion en los términos allí definidos. Sin embargo, el Gobierno de Su Majestad se obliga á acceder á toda instancia, que por motivos locales ó por cualquiera otra causa le hagan los obispos, para convertir las cuotas de imposicion, correspondientes á las respectivas diócesis, en inscripciones intrasferibles de la referida Deuda consolidada, bajo las condiciones y en los términos definidos en los artículos 7.°, 8.° y 9.° de este Convenio.

Art. 16.° A fin de conocer exactamente la cantidad, á que debe ascender la mencionada imposicion, cada obispo, de acuerdo con su cabildo, hará á la mayor brevedad un presupuesto definitivo de la dotacion de su diócesis, ateniéndose al formarlo á las prescripciones del Concordato. Y para determinar fijamente en cada caso las asignaciones, respecto de las cuales se ha establecido en aquél un *máximum* y un *mínimun*, podrán los obispos, de acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio, cuando así lo exijan las necesidades de las iglesias y todas las demás circunstancias atendibles.

Art. 17.° Se procederá inmediatamente á la nueva circunscripcion de parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas Potestades.

Art. 18.° El Gobierno de Su Majestad, conformándose á lo prescrito en el art. 36 del Concordato, acogerá las razonables propuestas, que para aumento de asignaciones le hagan los obispos en los casos previstos en dicho artículo, y señaladamente las relativas á seminarios.

Art. 19.° El Gobierno de Su Majestad, correspondiendo á los deseos de la Santa Sede, y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposicion á promover, no solo los intereses materiales, sino tambien los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá óbice á la celebracion de sínodos diocesanos, cuando los respectivos prelados estimen conveniente convocarlos. Asimismo declara que sobre la celebracion de sínodos provinciales y sobre otros varios puntos árduos é importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al mayor bien y esplendor de la Iglesia.

Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia, á fin de que se lleven á efecto sin demora las disposiciones del Concordato, que aun se hallan pendientes de ejecucion.

Art. 20.° En vista de las ventajas que de este nuevo Convenio resultan á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de Su Majestad Católica, ha acordado estender, como de hecho estiende, el benigno *saneamiento*, contenido en el artículo 42 del Concordato, á los bienes eclesiásticos enagenados á consecuencia de la referida ley de 1.° de Mayo de 1855.

Art. 21.° El presente Convenio, adicional al solemne y vigente Concordato, celebrado en 16 de Marzo de 1851, se guardará en España perpétuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato.

Art. 22.° El cange de las ratificaciones del presente Convenio se verificará en el término de tres meses, ó antes si fuese posible.

En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Convenio, con sus respectivos sellos. Dado en Roma, en dos ejemplares, á 25 de Agosto de 1859.

Firmado.—G. Card. Antonelli.—(L. S.)—Firmado.—Antonio de los Rios y Rosas.—(L. S.)

Tales son los solemnes concordatos de España, siendo de lamentar que las circunstancias hayan dificultado la completa ejecucion de los dos últimos, en puntos tan capitales, como la nueva circunscripcion de diócesis, el definitivo arreglo parroquial, y no poco en cuanto á dotacion del culto y clero. Lo relativo á estos puntos, y á tantos otros, como se desprenden de estos solemnes documentos, ha de verse en sus casos particulares, segun el rigor alfabético, como **CAPELLANÍAS COLATIVAS**, **COMUNIDADES RELIGIOSAS**, **MISIONES DE ULTRAMAR**, etc.

CONCORDIA DEL CONDE DE OSORNO. Con intervencion de este personaje, tuvo lugar el arreglo y concordia, que lleva su nombre, entre Cárlos V y los priores y comendadores de la Orden de Santiago, sobre fuero y exenciones de esta, y es la ley 1.°, tít. 8.°, lib. 2.°, Nov. Recop. Véase **CONSEJO DE LAS ORDENES.**

CONCORDIA. CONCORDIA FACHENETI. Algunas veces se llaman concordia los convenios entre pueblos sobre arreglo de sus diferencias, ó sobre aprovechamientos comunes. Como la base de la concordia en estos casos es una convencion, no hay sino estar, en su ejecucion y cumplimiento, á las leyes generales de los contratos y á las especiales de la concordia, si las tuviere.

En lo eclesiástico, los cabildos no pueden hacer concordias con dignidades de su seno, sobre prestaciones ó jurisdiccion eclesiástica, sin aprobacion de la Corona. (Ley 11, tít. 6.°, lib. 1.° Nov. Recop.)

Los arreglos ó conciertos de los Príncipes seculares con la Córte romana se llaman concordias, cuando las partes lo quieren así: en otro caso las convenciones, segun el uso, se llaman *concordias*, con mas propiedad, cuando no son concesion gratuita, ni rigorosa transaccion con formas diplomáticas de tratado, como decimos en el artículo **CONCORDATO**.

En España tenemos la *Concordia Facheneti*, que ciertamente merece especial mencion. Siempre habia sido, porque siempre tenia que ser, dilatorio y gravoso para los españoles, el ir á Roma con los pleitos de que competia conocer á la jurisdiccion pontificia, y siempre, por tanto, se reclamaba que radicase en España, pues los Nuncios no tenian mas que la ordinaria de su cargo. Deferente el Santo Padre, accedia á delegarla en algun obispo de la Península. A instancia del Reino, Cárlos V pidió y obtuvo, en 1537, del Papa Paulo III, que dicha jurisdiccion delegada radicase en el Nuncio. (*Pedimento fiscal* de Macanáz, núms. 15 y 16.)

Hallóse tambien dilatorio y dispendioso el procedimiento en la Nunciatura; y como coincidiese con agravios, que tambien se reclamaban de la curia romana, el Reino, en las Córtes de Madrid, pidió á Felipe IV que se obtuviese de Su Santidad el conveniente arreglo. El Rey encargó, como es sabido, la formacion de un *memorandum* á D. Juan Chumacero y Carrillo, el cual formuló el célebre *memorial* que lleva su nombre; y que, como peticion y queja respetuosa, aunque enérgica, se presentaba á la Santidad de Urbano VIII, en 18 de Diciembre de 1634, por el propio Chumacero, y fray D. Domingo Pimentel, obispo de Córdoba, como embajadores de la córte de España.

No son del caso, aunque importantes, todos los capítulos del memorial; pero sí el décimo, en que se esponian los perjuicios é inconvenientes de ser extranjeros los jueces de la Nunciatura, y largo y dispendioso el procedimiento, reclamando por tanto que en España se estableciesen *rotas*, ó turnos para las apelaciones, y que los jueces de ellas fuesen naturales de estos reinos.

La curia romana replicó, y por medio de Monseñor Esmeraldi se entregó, pasado algun tiempo, la réplica á los embajadores de España; preparándose por estos, y presentando á Su Santidad una esforzada y aun mas luminosa contestacion.

Eran diversos los agravios: diversa por tanto, y no fácil la solucion á todos; y por el pronto no hubo resultado, aunque sí sucesiva y parcialmente, haciéndose esperar algunas soluciones hasta el Concordato de 1737; y aun hasta el de 1753. En lo relativo, sin embargo, al gravoso procedimiento en la Nunciatura, hubieron de hacerse prevenciones al nuncio *D. César Facheneti*, que muy luego formó nuevas, y por entonces aceptables Ordenanzas de la Nunciatura, que consultadas con Su Santidad, aceptadas por la Córte de España, publicadas en 8 de Octubre de 1640, aprobadas por el Consejo, y ordenado su cumplimiento, por auto acordado de 9 del propio mes, llevan la mencionada denominacion de *Concordia Facheneti*. (Ley 2.ª, tít. 4.º, lib. 2.º, Nov. Recop.)

CONCUBINATO. Version de *concubinatus*, y esta voz del verbo *concubo*, acostarse juntamente, espresando en el órden moral y legal, cohabitacion de hombre y mujer. En su caso el varon se llama concubinario, y la mujer concubina.

Pero aquí la razon etimológica, esto es, el *concúbito*, no determina con precision el concubinato: de otro modo lo habria cuando quiera que hubiese concúbito, y por tanto en toda cohabitacion, lícita ó ilícita, y serian concubinato el adulterio, el incesto, la poligamia simultánea, el trato con la meretriz, como el matrimonio mismo.

Y es que en el presente caso, la razon etimológica no espresa más que el género, debiendo buscarse la diferencia en las leyes, ó en las costumbres que dieron orígen, condiciones y denominacion específica á dicha forma de union, siendo aquellas, como es sabido, las costumbres y leyes romanas, y á su vez la leyes del reino y la canónica.

Por la mencionada razon etimológica, se diria tambien concubinato aun la cohabitacion saltuaria y aislada; pero en el órden mo-

ral y legal, y por lo tanto en su acepcion técnica, el concubinato dice siempre *habitualidad*, presupone una union consuetudinaria, de mayor ó menor duracion.

El concubinato, por la ley Papia Popéa, se reputaba *moral*, *lícito*, *legítimo* y *legal* ante aquella legislacion gentílica; y bien se ve que seria todo lo contrario ante la ley cristiana, que luego apareció; por más que alguna vez haya parecido tolerado despues de ella; confundido á veces con el matrimonio clandestino; y, en su trasformacion sucesiva, en *barraganía*, aun autorizada por las leyes civiles, como entre nosotros las de Partida. Véanse, á propósito, los artículos **AMANCEBAMIENTO**, **BARRAGANIA** y **CELIBATO**, de que será complemento el presente, examinado el concubinato bajo el punto de vista de las leyes civiles y de las leyes eclesiásticas.

Una cosa es singular en este punto, y es que, mientras la voz concubinato se halla recibida en el lenguaje comun, y es técnica y frecuente en el jurídico; no se halla testual una vez sola en nuestras colecciones legales; al paso que es constante en las eclesiásticas; no espresando siempre en el órden civil el mismo desórden moral.

Porque, en efecto, por la legislacion puramente romana, el concubinato, antes de la ley Papia Popéa, era un desórden moral, no autorizado por la ley, aunque tampoco prohibido. Despues de dicha ley fué una cohabitacion *lícita*, como ella la establecia: por la ley canónica es y ha sido siempre una union reprobada, y es concubinato en este sentido toda union marital, en que no intervienen las bendiciones de la Iglesia católica: por las leyes civiles de España fué en algun tiempo autorizado bajo el concepto de barraganía: posteriormente, y por las leyes recopiladas, una union ilícita, reprobada y culpable, admitida por ellas la unidad católica, y sobre el particular el Concilio de Trento. Todo lo que veremos, y aparecerá demostrado, esponiendo ahora el concubinato por las leyes civiles romanas, y por las leyes canónicas.

Concubinato por las leyes romanas. Sabido es que entre los romanos habia una institucion conyugal, tan favorecida por la ley, cuanto podia serlo antes de la civilizacion cristiana: las *nuptias*, el *matrimonio civil*, pues que de la ley civil derivaba su naturaleza, y no habia aparecido aun la ley cristiana; y conocida es la inflexible prescripcion de la ley respecto de aquellas, y con relacion á la paternidad y filiacion legítima: *Ille pater est, quem justæ nuptiæ demostrant.*

Todos los nacidos de esta union tenian, por solo el hecho, padre legítimo conocido. Pero las *nuptias* no podian contraerse sino con ingénua y de calificadas circunstancias. Y no hallándose en ese caso la masa inmensa de esclavas y libertas, las de humilde extraccion, y las degradadas en sus personas, aun siendo ingénuas, por ocupacion vil, por condenas judiciales, por relajacion de costumbres, etc., es preciso deducir que en aquella potente civilizacion un número inmenso de sus asociados estaba como condenado á la degradacion moral y legal, pues, no pudiendo ligarse en union lícita, se lanzaban á nefarios contubernios, y escesos de liviandad y corrupcion, de que no habia que esperar sino hijos ilegítimos, hijos sin padres, que siempre, á los ojos de la sociedad y de la ley, tenian que avergonzarse de su orígen.

Hasta la misma union de las nupcias degeneró espantosamente, aun antes de los últimos siglos de la república, faltando á la fe conyugal el consorte, con adulterio y estupro y con simultáneas uniones ilícitas con ingénuas y no ingénuas, libres y no libres; cuyo desórden, cuando ofrecia, más ó menos, la habitualidad de vida de las nupcias, empezó á llamarse *concubinato*, como luego hemos dicho amancebamiento.

Pensóse al fin en atajar la universal corrupcion, en tiempo ya del imperio. Por las disposiciones legales, que citaremos, cualquiera creeria que los Emperadores se habian convencido de que no importaban tanto los muchos, como los buenos ciudadanos. Pero no fué así; y el período legislativo, á que llegamos, merece una especial digresion.

Julio César, despues de la guerra en España y otras provincias, revisando el censo, halló que habia disminuido en Roma, de un modo alarmante, el número de varones. Para

ocurrir al remedio, dictó algunas determinaciones, estimulando por premios el matrimonio. Augusto continuó la obra: en el año 735 y 736 de Roma, propuso al Senado y dictó algunas disposiciones, estableciendo penas y agravamientos contra los que no se casasen, ú obstasen el matrimonio de sus hijos, así como contra el adulterio y estupro, y por tanto contra el concubinato. Este conjunto de disposiciones de ambos Césares, constituyen lo que en la legislacion se llamó *Ley Julia*, y á veces *Leyes Julias*. No se conservó el testo íntegro de ellas. Es conocido su tenor por la citas, referencias y aserciones de los jurisconsultos, trasformadas luego en leyes del Digesto; y segun que hablan de matrimonio, de adulterio ó de estupro, se denominan *Lex Julia, de maritandis ordinibus; de adulteriis*, etc.

Así se preparaba el camino para el concubinato legal, establecido, al fin, por Augusto en el año 762 de Roma, siendo cónsules Papio y Popéo, por la célebre ley *Papia-Popea*. Tampoco de ella se conservó el testo íntegro. Venimos conociéndola tambien por las referencias de los jurisconsultos. El justamente celebrado Godofredo trató de restaurar el testo fraccionado. Heinecio, no menos acreditado, lo corrigió, y tal cual este publicó el laborioso contesto, compuesto de 44 capítulos, es la ley testual que conocemos, y á la que referiremos nuestras citas. El capítulo 8.° de la misma dice así:

«Quas personas per hanc legem uxores habere non licet; eas concubinas habere jus esto: ingenuam honestam in concubinatu habere jus ne esto.»

Es decir, que quedaba intacta la ley de las nupcias, y, como hasta allí, no podrian éstas verificarse sino con ingénua honesta; pero los que nunca pudieron, ni podrian contraerlas, podrian celebrar ahora entre sí una union *sui generis*, que no seria adulterina, porque habia de ser entre hombre y mujer libres, legalmente unidos; ni incestuosa, porque, como veremos, quedaba rechazada esa circunstancia; no seria estupro, porque no seria un acto de cohabitacion aislada y de engaño á la mujer honesta; no seria, en fin, el comercio degradado de la meretriz, ni ninguna de las otras uniones reprobables, que espresaban y espresan siempre la corrupcion de la sociedad: seria una union legal, consensual, de uno con una sola, libres los dos; pero aquella no ingénua honesta, y cuya union se llamaria *concubinato*.

No examinaremos si por este medio ganaron ó perdieron las costumbres, si se purificó ó no la union de las nupcias; pero, sin ser tan duros como otros con el legislador romano, diremos, que despues de todo, las clases inferiores quedaban, como antes, incapacitadas de contraer nupcias, y que no podian hallar en la nueva forma de union que se hacia lícita, las ventajas sociales que en la union nupcial. Como quiera que sea, la nueva union constituye el *concubinato* técnico y legal de los romanos, y que, mas ó menos trasformado, como espondremos, ha llegado hasta nosotros, y podria verse reproducido, en los diversos estados no católicos, en el matrimonio civil.

Algunos han creido ver en él, al tenor de las leyes romanas, una union conyugal de órden inferior, imitacion de las nupcias; pero, ¡cuán diversa! Aquí no habria padre legítimo, ni hijos legítimos, ni madre de familia, ni efecto conyugal alguno favorecido por la legislacion. Al lado de una union legal, dice Jibbon (*Historia del Derecho*), habia así una union natural; lo que no es del todo exacto, pues el concubinato, como las nupcias, estaba condicionado por prescripciones civiles y no ceñido puramente á las del derecho natural: eran por tanto dos uniones civiles, ambas diversas, en su esencia, del derecho natural, que no escluye categorías en esa forma para la reproduccion de la especie.

En cuanto á sus efectos y requisitos, conocidos los de las nupcias, puede decirse que eran todo lo contrario. La ley misma empieza ya escluyendo de la nueva union legal á la ingénua honesta. Además de eso, en la constitucion convencional del concubinato no concurria ninguna de las solemnidades de las nupcias, ni participaba de los efectos civiles de éstas. En su consecuencia, ni dote, ni *confarreacion*, ni *coempcion*, ni el propósito y

compromiso de perpetuidad (*consortium omnis vitæ*), ni comunicacion de dioses lares y penates (*divini et humani juris communicatio*). En el concubinato no habia que esperar tampoco, como se ha notado ya, la cualidad y honrosos connotados de matrona, y madre de familias, padre de familias, é hijo de familias. Los hijos no eran espúreos (vulgo *quæsitos*), ni adulterinos; pero tampoco legítimos: eran solo hijos de concubinato. Vivian en la casa del padre natural y se sentaban á su mesa; pero no podian llevar el nombre del mismo, ni heredarle; y antes eran reputados á los ojos de la ley y de la sociedad, como hijos sin padre, *cuasi sine patre liberi*. El padre podia, sin embargo, espresarles en público su afecto, y ellos, libres de la cualidad depresiva de espúreos, podian aspirar á cargos públicos.

Por lo dicho se vé que la concubina no se elevaba nunca á la dignidad del marido, ni llevaba el nombre de este, ni podia llamarse *uxor*: estaba en la familia, pero como hemos dicho, no podia llamarse *madre* de familias. Se llamaba *amica convictrix*, *amica non empta*; es decir, vivia maritalmente con un hombre, pero no era *uxor*, aunque tampoco *meretrix*.

No podia recibirse en concubinato á la menor de 12 años, ni á la que por sus circunstancias haria la union incestuosa. Podia serlo, sí, la ingénua no honesta, ó que se hubiera envilecido. Como la patria potestad, en fin, procedia solo de las nupcias, no la habia en el concubinato.

A veces se ligaban en él los patricios y ciudadanos de calidad, huyendo de los lazos mas estrictos del matrimonio; ó habiendo fallecido su legítima consorte, evitando por este medio el dar madrastra á sus hijos legítimos. Así vemos que lo verificaron, muertas sus consortes legítimas, no ya senadores y patricios; sino aun Emperadores, como Vespasiano y Marco Aurelio.

Leyes romanas y *ley cristiana*. Pero entretanto habia aparecido el cristianismo, para el que es concubinato reprobado toda union que no sea matrimonio católico; y su influjo saludable, se haria sentir, mas ó menos pronto, primero sobre las costumbres, luego sobre las leyes, segun que los Emperadores lo abrazasen con mayor ó menor decision. Así Constantino, para transformar el concubinato en matrimonio, si ser pudiera en medio de tanta corrupcion, y de la dificultad que debia ofrecer la inmensa variedad de razas y de ritos, ordenó, que los hijos, habidos hasta entonces en concubinato, pudieran hacerse legítimos por subsiguiente matrimonio, ó ligándose en matrimonio sus padres concubinarios que fuesen libres de cualquier otro lazo conyugal. (Ley 5, C. *De natur. lib.*) Para estrechar á los padres á la union legítima, prohibió que pudiesen donar, ni dejar cosa alguna en testamento, ni á los hijos no legitimados, ni á sus madres. (Ley 1.ª, id. Cod. Theod.) Prohibió el concubinato á los senadores y patricios (L. 1.ª, C. *De nat. lib.*); y lo propio á los casados, ó unidos en matrimonio (L. 1.ª, C. *De concub.*), como ya lo habia sido, aunque sin gran resultado, por la ley Julia.

Esta plausible iniciativa puede no espresar, sin embargo, sino lo que permitian los tiempos y las difíciles circunstancias del Imperio. Ampliada con perseverancia, podria haber sido eficaz; pero por el contrario, como nota bien Troplong, no se verá en los Emperadores sino vacilacion y estériles combinaciones de medios ineficaces. Y no serán solo los Emperadores, cuyo imperio venia luchando con su agonía, que no habia de tardar; sino aun los legisladores cristianos sucesivos; y ya en pleno cristianismo, ni aun las leyes civiles y canónicas, coadyuvándose entre sí, atajarian de todo punto el mal, que por eso y aunque con nombres y vicisitudes, que iremos esponiendo, ha llegado hasta nuestros dias, como pasará de ellos.

Despues de Constantino, Valentiniano I, en Occidente, por su Constitucion de 371, revocó la prohibicion de aquel Emperador, sobre que los hijos naturales y la madre no pudiesen recibir por donacion, ni testamento, cosa alguna del padre; atribuyéndoles ahora capacidad de recibir. (Ley 1.ª, C. Th. *De nat. lib.*)

Valente, rehusándolo al principio, admite

la misma disposicion en Oriente. (Godofredo, á dicha ley 1.ª)

Valentiniano III revocó esta determinacion en Occidente (Godofredo á la ley 2.ª C. id.); pero Teodosio el jóven la sostuvo en Oriente.

Justiniano confirma y sostiene la determinacion de Valentiniano I (leyes 2 y 8, C. *De nat. lib.*: y novela 98, cap. 12), y ordenó (ley 5, tít. 57, lib. 6, Código) que si una concubina libre hubiere hijos de un hombre libre, por *costumbre lícita*, esto es, por puro concubinato, al tenor de la ley Papia Popéa, concurriesen en su caso con los hijos legítimos de la misma á heredar sus bienes legítimos, si los tuviere: califica de naturales, como habidos en *union lícita*, á los hijos de concubinato (Nov. 74, cap. 7; y 89, cap. 15: ley 5, C. *Ad Senat. cons. Orphit.*), y estiende el beneficio de Constantino sobre legitimacion por subsiguiente matrimonio á los hijos de ulteriores concubinatos. (Nov. 83, capítulo 1 y 12, y ley 7, C. dicho tít.) Prohibió, en fin, tener más de una concubina (Nov. 18 capítulo 5), y ninguna los hombres casados, aunque fuese esclava, como nunca, dice, se les habia permitido.

Dos cosas son de notar en lo dicho hasta aquí: 1.ª, que en el imperio de Justiniano, período legislativo, el más brillante sin duda de la legislacion romana; de Justiniano Emperador cristiano, legislador y codificador infatigable, el concubinato se sostiene, ora como *costumbre lícita*, ora directamente, en parte, como le habian establecido las leyes de Augusto, pues no se derogan: y 2.ª, y aunque de otro órden, que no sólo habia mejorado, desde Constantino, la condicion de los hijos naturales, por largo tiempo víctimas inocentes de agena flaqueza y de equivocadas teorías de la legislacion; sino que ahora, fundada en principios de humanidad y de justicia, se consolidaba, como teoría legislativa, que aceptarian despues las legislaciones europeas, y muy señaladamente la española, si bien bajo el criterio racional y moral, no todavía de nuestra legislacion de Partidas, segun decimos en su artículo; sino de nuestra ley 11 de Toro, y tiempo adelante, por el plausible sistema de legitimacion por rescripto del Príncipe.

Leon el Filósofo, en fin, abolió el concubinato en Oriente (Nov. 89, 90 y 91); pero eran ya esfuerzos inútiles: al derrocamiento del imperio romano, y á la perturbacion de las irrupciones, habia de seguirse la debilidad de la ley, la confusion y el desbordamiento de las costumbres, en Oriente, como en Occidente; debiendo considerar en este punto una circunstancia de funesta trascendencia. El celibato del clero, no era todavía, ni hasta el siglo XIII, un hecho, y como ley estricta, aun en Occidente; miéntras que en Oriente no lo ha sido nunca de hecho y en un todo: el clero luchaba, pues, con este ejemplo y ocasion, y al mismo tiempo con las inspiraciones de su conciencia y de la ley cristiana, no ménos que con las amonestaciones de la Iglesia en todos tiempos sobre continencia. El concubinato además revistió, sucesivamente, y procurando cohonestarlo, las formas de un matrimonio clandestino; para lo cual bastaba no haber declarado ante testigos, al verificar la union, que era concubinato (ley 2, tít. 14, Part. 4): forma, que ofrecia desde luego menos repugnancia; y enervada así en cierto modo la energía del clero para atajar el mal con la persuasion y con el ejemplo, el mal se estendió espantosamente, hasta el punto que revelan las perseverantes amonestaciones y anatemas de los concilios en todos tiempos. En este punto ya, nuestras observaciones sobre el concubinato, segun las leyes civiles, se concretarán á las de España.

Erigida en ella la monarquía goda sobre las ruinas del imperio romano, es sabido, sin embargo, que las dos razas, romana y goda, siguieron largo tiempo rigiéndose por sus leyes respectivas, viniendo al fin ambas á serlo por las españolas. Hasta ese momento, claro es que el concubinato vendria prevaleciendo en la raza romana, sobre la cual, sin embargo, como sobre la goda, el cristianismo hacia sentir su influencia, sobre todo desde Recaredo. Ya antes, en el concilio primero de Toledo, y despues en los ulteriores concilios nacionales y provinciales, la Iglesia clamaba sin cesar contra el concubinato, principal-

mente del clero: y es cosa singular que los legisladores seculares, confiados acaso en el efecto que producian las amonestaciones y penas de la Iglesia, dejan de hablar especificamente del concubinato por muchos siglos; y al contrario hablan, y aun apoyan, como veremos, otra relajacion moral, en que aquel se vino trasformando: la barraganía.

Como punto de partida histórico y legislativo, es apropósito considerar que los siglos V, VI, y mitad del VII, forman un periodo de lucha social en España, entre la legislacion romana, la goda y la cristiana: la romana, que era la de los vencidos; la goda, de los vencedores, y la cristiana, que dominaba sobre las dos, haciendo preponderar con su mayor ilustracion, con su doctrina, y hasta con su anatema, la institucion del matrimonio legítimo y solemne, sobre toda otra union bastarda. Perdiendo siempre terreno la legislacion romana, es claro que lo perdian *las nupcias*, y el concubinato técnico: y lo perdieron del todo, cuando al fin, por la fuerza de los hechos, y por la conocida ley de Recesvinto, se verificó la unificacion de razas, proclamando, con la Iglesia, como única union legítima entre ellas, el matrimonio cristiano.

Con eso y todo, es muy de notar que en el Fuero Juzgo no se menciona el concubinato; pero queda indirectamente reprobado y escluido por solemnes disposiciones, que venian coadyuvando á la ley de la Iglesia. «E por esto *tollemos nos la ley antigua*, dice la insinuada de Recesvinto, *é ponemos otra meyor*, y establecemos por esta ley, *que ha de valer por siempre*, que la muyer romana puede casar con home godo, é la muyer goda pueda casar con home romano. *E que el home libre pueda casar con la muyer libre cual que quier*, que sea convenible por consejo, é por otorgamiento de sus parientes.» (Ley 1, tít. 1, libro 3, Fuero Juzgo.) Sin mencion de las *nupcias*, ni del concubinato de la ley romana, no pueden quedar mas escluidas, en su acepcion técnica.

Y todavía la ley 18 (tít. 4.°, id., id.) dice, respecto del clérigo: «Mandamos nos que el sacerdote, ó el diácono, ó subdiácono, que *se ayuntase con la bibda, ó con la virgene*, ó con otra muyer cualquiera, ó por casamiento, ó por adulterio, manteniente quel obispo, ó el juez lo sopiere, luego los faga partir; é despues queste fuere metido en poder de su obispo, metal en un logar de penitencia... é las muyeres, que este mal ficieren, reciba cada una cien azotes...» Se vé que, tambien sin mencionarlo espresamente, así como el adulterio, queda escluido y reprobado el concubinato de los sacerdotes, pues eso era, cuando no era más, la union con la *bibda* y con la *virgene*.

Ya hemos dicho que el concubinato no pasó á nuestras colecciones legales con su denominacion testual; pero sí con su significacion, ó más bien, con una ú otra de sus significaciones originarias. Antes de la ley Papia Popéa, espresaba la infidelidad en las nupcias por parte del varon, implicándose en otras uniones no lícitas con ingénuas ó no ingénuas, libres ó no libres; y significaba tambien la union consuetudinaria del hombre libre con una ó más; lo cual, todo, andando los siglos, se reprodujo en el *amancebamiento*: despues de la mencionada ley Papia Popéa era la union consuetudinaria de hombre libre con mujer no ingénua, con las desventajas conyugales que arriba hemos indicado á lo cual se asimiló despues la *barraganía*.

Hemos visto que en el Fuero Juzgo, sin mencionarlos, se escluyeron las nupcias y el concubinato, ya de legos, ya de clérigos. Verificada la irrupcion árabe, así como entre los romanos se denominó la union mencionada de *concubo* y *concúbito*; ahora, atendiendo al género y forma de la union, de la voz arábiga *barra*, que significa *fuera*, y la del romance *gana* ó ganar, se denominó *barraganía*, espresando *ganancia fuera de union legítima*, y segun precepto de la Iglesia; y por eso los hijos de barraganía se llamaron *hijos de ganancia*.

Háblase de la barraganía, como tolerada, en el Fuero Viejo de Castilla.

En las Partidas se autoriza en los legos (tít. 14, Part. 4); se reprueba en los clérigos (tít. 6, Part. 1); y como todo queda espuesto en su lugar, la barraganía simple, bastardeada con el adulterio, y otros escesos, de la

palabra, romanceada, *manceba*, que era la *mujer jóven*, y de *manceba en cabellos*, que era la jóven soltera, se dijo *amancebamiento* y *mancebías*, que las leyes recopiladas prohiben en un todo, para legos y clérigos (título 26, lib. 12, Nov.), siendo ese el estado legal en España, confirmado por el Código penal de 1848 y 1850.

Una cosa es notable, y es, que en ninguna de nuestras leyes hay pena señalada para el concubinato de solteros, opinando los autores que, pues está prohibido, aunque sin sancion penal, habria de castigarse con pena extraordinaria. Pero el Código penal declara no ser delitos sino los espresados como tales en el mismo; y deroga todas las leyes penales generales anteriores, sin que hoy, por el derecho constituido, tengan lugar las penas extraordinarias. A los tribunales toca apreciar y juzgar el caso genérico á que se refiere el artículo 363 del Código penal mencionado, reproducido por el 456 del nuevo Código de 1870, segun los que, en escesos de este género, serán castigados con la pena de arresto mayor ó prision correccional y reprension pública, los que de cualquier modo ofendieren el pudor ó las buenas costumbres, con hechos de grave escándalo y trascendencia, no comprendidos espresamente en otros artículos del mismo. (Además de los autores y artículos citados, véase todo el título 7, lib. 25, Digesto; Heineccio, *Commentarius ad legem Juliam, et Papiam Poppæam.*)

Con posterioridad á dichos códigos penales, se ha autorizado en España el *matrimonio civil*, induciendo la gravísima novedad que espresamos en su artículo.

El concubinato por las leyes eclesiásticas para los legos y clérigos. Hemos visto que las leyes civiles, especialmente las recopiladas, estienden sus determinaciones en la materia á legos y eclesiásticos; y lo mismo observaremos en las eclesiásticas, por la sencilla razon de que, aunque con diversos fines; una y otra sociedad están de tal modo unidas, que tienen unos mismos súbditos. Entre ellos, sin embargo, hay una clase, llamada por divina institucion á ser, en lo religioso y moral, norte y modelo de los demás: tal es el clero; y por eso las leyes eclesiásticas son, respecto de él, más estrictas y rigorosas que con los demás, segun queda demostrado en los artículos citados en el párrafo anterior, y á mayor abundamiento reseñaremos en el presente y en el de *matrimonio*, sin que sea necesario por lo mismo tratar con separacion del *concubinato del clero*; por qué la diferencia resultará recorriendo en conjunto las disposiciones eclesiásticas.

Hemos dicho que la voz concubinato se ha conservado constantemente en el lenguaje canónico, aunque no siempre con la misma significacion, la cual hay que determinar por los tiempos y circunstancias. De otro modo, habria que decir con algunos autores, que «antiguamente habia concubinas *legítimas, aprobadas por la Iglesia.*» (Abate Andrés, Dicc. canónico), lo cual no es dado sostener en tal concepto. Se refiere el autor al conocido cánon 3.° del Concilio 1.° de Toledo, incorporado con el tiempo al Cuerpo del Derecho canónico (C. Is qui, dist. 34.) *Is, qui non habet uxorem*, dice, *et pro uxore concubinam habet, á communione non repelletur: tamen, unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ, sit conjunctione contentus.*

El tenor es incontestable; pero ni en el tiempo en que este cánon fué formulado por el Concilio de Toledo, podia referirse á la verdadera concubina, cuando tanto se venia clamando ya contra el concubinato; ni menos en el tiempo en que siglos despues fué incorporado al Decreto de Graciano. La glosa quiere que se refiera al matrimonio menos solemne, y así es la verdad. Debe tenerse presente, que si bien la Iglesia proclamó siempre la unidad y escelencia del matrimonio, y quiso se solemnizase con sus bendiciones, no era infrecuente omitirlas, y nunca, hasta el Concilio de Trento, se declaró la nulidad del matrimonio clandestino, y por tanto no solemne. En razon de ello, y segun se ha insinuado, las leyes de Partida declararon que, si uno se uniese con viuda, ó soltera libre, y, al verificarlo, no hiciese constar ante testigos, que la recibia como barragana, «sospecha cierta seria contra ellos, que era su muger legítima; é si pleito naciese sobre

esta razon, así lo juzgaria el juez seglar.» (Ley 2.ª, tít. 14, Part. 4). Y con irrecusable autoridad, declara asimismo el Concilio de Trento: *Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia, libero consensu contrahentium facta, rata et vera esse matrimonia, quandiu Ecclesia ea irrita non fecit...*» (Capítulo 1.º, Sess. 24, *de reformatione matrim.*)

Nada hace, que en el largo período, que corrió, desde el principio de la era cristiana, hasta el Concilio de Trento; en las implicaciones, á que dió ocasion, como en su lugar esponemos, el celibato del clero y el matrimonio del mismo, ora autorizado, ora tolerado, ora prohibido; y en conjunto la índole peculiar de los tiempos; nada hace, decimos, que se presente algun caso ó incidente, de mas ó menos difícil esplicacion: en principio, en buena doctrina, una cosa es cierta y es, que el concubinato, en su genuina y reprobable significacion, siempre fué reprobado por las leyes eclesiásticas, y por la doctrina de la Iglesia. *Fornicari vobis non licet*, decia San Agustin: *sufficiant vobis uxores: concubinas habere, non licet vobis, et si non habetis uxores. Tanto magis damnatio erit vobis, si volueritis habere uxores et concubinas.*

Y esta reprobacion, que alcanza á todos los fieles, comprende con superioridad de razon á los sacerdotes. Así el *concubinato* eclesiástico, ha sido objeto de constante anatema en la legislacion canónica. (C. Interdixit, dist. 32: *Canones Cum Omnibus, Volumus, Fœmin. dist.* 81: *C.* 1 *y siguientes, de cohabitatione cleric. et mulier.*)

Y no solamente se reprobaba y perseguia el concubinato; sino aun la ocasion, más ó menos próxima, de él. Así el Concilio de Elvira (cán. 27), prohibió que los clérigos pudieran tener en su casa otras mujeres que la madre, ó su hija, vírgen consagrada á Dios. Con mayor autoridad, el Concilio general de Nicea (cán. 3), hallando peligrosa y muy estendida ya la costumbre de que los clérigos, con los nombres de *Agapetæ, sorores, subintroductæ, y supraintroductæ*, tuvieran mujeres en su casa para su servicio, y á veces por motivos de piedad, prohibió que pudieran tener otras que sus *madres, hermanas* ó *tias*, y en todo caso, mujeres, en que ya no pudiera caer sospecha: disposicion, que se vé reiterada, y penada su inobservancia, por casi todos los concilios, nacionales y provinciales, de los siglos posteriores, no ya hasta el Concilio de Trento; sino aun despues de él. Es notable entre otras, la disposicion del Concilio de Maguncia, de 512, prohibiendo que el clérigo pudiera tener en casa, ni aun á la madre y hermana.

La resistencia al cumplimiento del Cánon de Nicea, aun despues de amonestado el clérigo por su prelado, para la separacion, hizo mirar ya como concubinaria la retencion de dichas subintroductas: á la admonicion seguia el castigo, y en ese sentido se vé ya esplicada la accion constante de los concilios. Aunque no sean los mas rigurosos de la Iglesia de España, pueden consultarse sobre el particular, entre otros, los de

Gerona (de 517), Cán. 7.
Toledano 2.º (527), Cán. 3.
Lérida (546), Cán. 15.
Braga 1.º (561), Cán. 15.
Toledano 3.º (589), Cán. 5.
1.º de Sevilla (590), Cán. 3.
Toledano 4.º (633), Cán. 42 y 43.
Id. 8.º (653), Cán. 5.º
3.º de Braga (673), Cán. 17.
De Boganza (1050), Cán. 3.

Efecto de las circunstancias, el concubinato del clero tomó mayores proporciones, del siglo X en adelante; y grave sería tal estado de cosas en el siglo XIII, en que con el fin de atajar el mal, y asistiendo el Cardenal Guillermo Sabinense, delegado apostólico, se celebró (en 1228) el Concilio de Valladolid, en que se adoptaron las graves disposiciones que pueden verse en su capítulo, *De concubinariis.*

Todavía podrian consultarse los Concilios:
Compostelano (1056), Cap. 3.
De Gerona (1068), Cap. 7.
De Palencia (1129), Cap. 5.
Lérida (1173), Cap. 5, asistiendo el delegado pontificio, Cardenal Jacinto.
Lérida (1229), Cap. 8.
Leon (1267).
Y de Peñafiel (1302), Cap. 2.

El Concilio de Basilea (1431), hoy enumerado entre los concilios generales, aplicó graves sanciones contra el concubinato de clérigos y legos, fulminando excomunion.

Así, y no siendo menos rigorosos los Concilios del resto de la Iglesia de Occidente, llegaron las cosas al Concilio de Trento, el cual establece, en cuanto á los clérigos, que ni en casa, ni fuera, tengan concubinas, ni mujeres que inspiren sospechas, bajo las penas establecidas en los cánones, ó por los estatutos de las iglesias: que si amonestados por su superior, no se abstienen, pierdan por la primera vez la tercera parte de frutos y emolumentos de sus beneficios y pensiones, en favor de la fábrica ú otro lugar pio, segun juicio del obispo: todos los frutos y la administracion de los beneficios, si no obedecen á la segunda intimacion, procediendo en ello el obispo, como delegado de la Santa Sede: á la tercera, quedan privados respectivamente, de oficios y beneficios, é inhábiles para oficios, beneficios, honores y dignidades, salvo lo que su eficaz enmienda pueda aconsejar al diocesano, que en esto procederá privativamente, y sin estrépito ni formas de juicio, y sin que la apelacion suspenda la ejecucion. Si el clérigo no tiene beneficio, será castigado con cárcel, suspension, inhabilitacion y demás penas canónicas, segun juicio del obispo. Si por acaso los obispos dieran ocasion á demostraciones en el particular, y amonestados por el sínodo provincial, no se abstuvieren, por el hecho quedan suspensos; y si aun así persistieren, el sínodo elevará el caso al Sumo Pontífice, que proveerá segun él, hasta por privacion. (Cap. 14, ses. 25, *De reform.*)

En cuanto á los legos, ya libres, ya casados, implicados en concubinato, si, amonestados, hasta por tercera vez, por el ordinario no se corrigen, serán excomulgados. En el mismo caso, las mujeres, ya libres, ya casadas, podrán ser arrojadas del lugar, ó de la diócesis, impetrando el ordinario, siendo preciso, el auxilio del brazo secular, y todo sin perjuicio de las demás penas canónicas, establecidas contra los adúlteros y *concubinarios*. (Cap. 3.°, sess. 24, *De reformat. matrim.*)

Todavía despues del Concilio de Trento, se repiten las antiguas amonestaciones y sanciones, y pueden verse los concilios de Toledo de 1665: de Valencia del propio año: de Granada de 1582, y de Toledo de igual fecha.

La penalidad ha venido siendo, desde los primeros siglos, despues de la amonestacion sin resultados, la privacion, ya de frutos, ya de beneficio: la inhabilitacion, la espulsion del territorio, la escomunion. Alguna vez se mandó, aunque muy aisladamente, que no se oyese misa de sacerdote concubinario, y que las concubinas pertinaces no fuesen enterradas en sagrado.

Siempre, por supuesto, se castigó con mayor rigor al concubinato público, que el no público. El Concilio de Basilea declaró ser públicos concubinarios, *non solum hi, quorum concubinatus, per sententiam, aut confessionem, in jure factum, semper rei evidentiam, quæ nulla possit tergiversatione salvari, notorius est; sed qui mulierem suspectam, et difamatam tenet, et per suum superioris admonitus, ipsam cum efectu non dimittit.*

Hoy, donde el Concilio de Trento ha sido admitido con fuerza de ley, como en España, ese es, en el particular y en lo canónico, el derecho novísimo: si bien el no haber sido recibido en general, el no estar en práctica, y antes sí pudiera decirse que en desuso, los sínodos provinciales, y la legislacion secular sobre barraganías, y amancebamientos, y por tanto sobre concubinatos de clérigos y legos, hace menos eficaces las disposiciones del Concilio de Trento; si bien entre nosotros, y en cuanto á penas temporales, la legislacion recopilada, como en su lugar dejamos espuesto, no puede ser mas eficaz, aunque de tal modo templada por el Código penal.

En nuestras provincias de Ultramar, los concilios de Méjico de 1555 y 1585; y el de Lima de 1582, aplicaron el mismo rigor que los de la Península: hoy, como siempre, la disciplina, en el punto en cuestion, es allí la general de la Iglesia y la particular de España, como es la misma la legislacion penal. Véase á Godofredo: á Heineccio, *Ad legem Juliam et Papiam Poppæam*: Tomasino, *De jur. ecclesiástico*: Aguirre, *Disciplina ecc.* en su

Esposicion magistral, general y particular de España, tom. 4, fólio 202 y siguientes: *Cánones de la Iglesia de España*, por Tejada y Ramiro: Fleury, *Historia ecc.*

Compuesto ya el presente artículo, por la actual Constitucion política de 1.° de Junio de 1869, se establece la igualdad de cultos, que habrá de inducir, como el matrimonio civil, capitales novedades en punto al concubinato en lo civil, y al matrimonio católico. Véase **MATRIMONIO.**

CONCUERDA. Voz técnica, empleada en el órden escriturario, para esponer la conformidad testual de una copia, ó trasunto, con su matriz ú original. Sabido es que la copia oficiosa, por concuerda, no lleva fuerza probatoria; sino cotejada en forma judicial. No así, cuando la copia no es oficiosa; sino sacada de mandato judicial, con citacion de parte interesada; salvo que esta proteste y demuestre su protesta de no conformidad de la copia, ó compulsa con el original. Lo dicho se entiende cuando el notario no es el que autorizó el otorgamiento, en cuyo caso, aun cuando en la saca ó compulsa se use de la palabra concuerda, aquella, para efectos de derecho, no es *copia*, sino *original*. La fórmula en el primer caso es: *concuerda con su original, á que me refiero*: en el segundo: *concuerda, ó es conforme, con su original, á cuyo otorgamiento presente fuí*. Véase **COMPULSA, COTEJO, ESCRITURA.**

CONCURRENCIA DE ACREEDORES. Dábase esta denominacion en algunos puntos á los concursos de acredores, promovidos por los deudores, y por lo tanto á los de espera, quita y cesion de bienes; pero no á los que habian sido provocados por los acreedores. Despues de la publicacion de la ley de Enjuiciamiento civil esta frase va cayendo en desuso, desapareciendo el acto que espresaba: esto como acto judicial; pues en el órden convencional, nada se opone á que, á mocion de los acreedores, como á su vez del deudor, se entiendan unos con otros sobre quita, espera, y cualquier otro arreglo. Véase **CONCURSO DE ACREEDORES.**

CONCURRENCIA DE CREDITOS. V. **CONCURRENTE.**

CONCURRENTE. En la compensacion y mútua peticion se dice cantidad concurrente, entre créditos desiguales, una parte del mayor igual al menor. Así entre un crédito de ciento y otro de cincuenta, la cantidad concurrente es la de cincuenta.

En los concursos de acreedores, y casos análogos, se llaman concurrentes los créditos, de tal modo iguales en el derecho, apreciadas todas sus condiciones y circunstancias, que no hay medio legal de diferenciarlas: en cuyo caso, si los bienes embargados, secuestrados, etc., que responden á los mencionados derechos concurrentes, no alcanzan para todos, ninguno de los acreedores, que se hallan en el caso, cobrarán por entero; sino á prorata. Véase **CONCURSO DE ACREEDORES.**

CONCURSO. Del verbo concurrir, y este del verbo latino *concurro*, correr junta, ó simultáneamente. Espresa siempre concurrencia de varios, con idéntico fin; pero esclusivo, pues todos aspiran á conseguirlo para sí, ó con preferencia; y suele ser un honor ó cargo público, una dote, ó pension, un beneficio, ó prebenda; el pago de un crédito, etc. Cuando para obtener el objeto á que se aspira, basta acreditar cargo, méritos ó servicios, se esponen y comprueban, la autoridad competente los aprecia y compara, hace la adjudicacion en su caso; y eso es todo el concurso, cual sucede en el órden académico, para el ascenso gradual en las cátedras.

Si además de lo dicho hay que practicar ejercicios, que acrediten la suficiencia general ó especial del concurrente, entonces, atendiendo á la importancia de este trámite, el concurso se denomina de ordinario, *oposicion*, y tal es, en lo eclesiástico, la oposicion á prebendas de oficio; en lo universitario á cátedras. Otras veces, por la inversa, se denomina simplemente concurso, como sucede en la provision de curatos. En este caso, si la oposicion es pública, y ante jueces sinodales, se llama *concurso abierto*. Véase **CURATO.**

En las prácticas eclesiásticas, y muy especialmente de la curia romana, efecto de que el Papa es colador universal por su suprema gerarquía, y que no en todos los Estados hay un colador, casi universal, por patronato, co-

mo en España, los concursos se clasifican por la índole ó calidad del requisito, que atribuye derecho, y en su caso preferencia, como concurso *de exámen*, que es el que llamamos de oposicion; *de datas*, en la ciudad de Roma; *de expectantes*, por títulos académicos, con preferencia todavía respecto de la calidad del título, como doctor, licenciado, bachiller, y de la facultad además, como teología, derecho, medicina, etc.

En lo civil, entre nosotros, el caso más notable de *concurso*, es el de acreedores. Véase su artículo.

En todo concurso, en que hay que ejercitar ó probar, se encierra un pacto entre el que lo autoriza y el que bajo de esa garantía concurre; y responde á las condiciones del mismo, que deben ser conocidas de antemano.

CONCURSO A CURATOS. Véase **CURATO.**

CONCURSO DE ACREEDORES. En el artículo **CONCURSO**, que precede, hemos espuesto la etimología y significacion de esta palabra. Unida á la *de acreedores*, significa el juicio que tiene por objeto pagar á los acreedores con los bienes que tenga el deudor comun, y hasta donde estos alcancen, cuando no puede satisfacer á todos cumplidamente, ó al vencimiento de los plazos respectivos. *Pleito de acreedores* se llama tambien en algunas leyes recopiladas al juicio de concurso, el cual tiene lugar, como se ha indicado, no solo cuando el deudor carece de bienes bastantes para cubrir sus compromisos, y su *pasivo* es, por consiguiente, mayor que el *activo*; sino tambien cuando no puede realizar el metálico necesario á dicho fin, aunque tenga bienes suficientes para pagar.

Puede promoverse este juicio á instancia del deudor, ó por los mismos acreedores: en el primer caso se llama *concurso voluntario*; y en el segundo *concurso necesario*. Los dos tienen un mismo fin; pero se diferencian en su orígen y en algunos de sus efectos. En su orígen, porque el voluntario comienza á instancia del deudor, haciendo cesion ó abandono de sus bienes á favor de los acreedores, con las formalidades que espondremos en la seccion respectiva; y el necesario es promovido por estos, debiendo formalizarse, aunque aquel lo resista, siempre que concurran los requisitos que para ello exije la ley. En sus efectos, porque con la cesion ó abandono voluntario de bienes se libra el deudor de las molestias, que con las reclamaciones judiciales pueden causarle sus acreedores, como se libraba tambien de la prision, cuando esta procedia en los concursos; al paso que en el necesario debe ser tratado con todo el rigor de la ley. De aquí el que la *cesion de bienes* ó concurso voluntario haya sido considerado, segun se dijo en su lugar, como un *beneficio* dispensado por la ley á los deudores de buena fé, al cual pueden recurrir en determinadas circunstancias para obligar á sus acreedores á que reciban los bienes cedidos en pago de sus créditos. Véase **CESION DE BIENES.**

La ley de Enjuiciamiento civil ha comprendido en el concurso voluntario la *quita* y *espera*, recursos que puede utilizar el deudor de buena fé para obtener de sus acreedores, bien la condonacion ó remision de parte de sus deudas; ó bien una dilacion, plazo ó moratoria para el pago; ó ambas cosas á la vez.

El juicio de concurso es de los llamados *universales*, porque á él deben concurrir, no solo los acreedores, para justificar la legitimidad y preferencia de sus créditos á fin de que se les pague por el órden que corresponda; sino tambien cuantos tengan que deducir alguna reclamacion contra el caudal concursado, ya sea por razon de dominio, ó por otro motivo. De consiguiente, en ese mismo juicio ha de ventilarse todo lo relativo al reconocimiento y graduacion de créditos, á la conducta del concursado por si hubiere motivo para exigirle responsabilidad criminal, á la venta de los bienes y demás conducente á su fin, que es el pago de los acreedores.

Todas las materias indicadas serán objeto del presente artículo; pero el método de la ENCICLOPEDIA exije que nos limitemos en él á lo que tenga relacion con el procedimiento, y sea indispensable para resolver las cuestiones y dificultades propias de estos juicios,

reservando para sus artículos respectivos lo que se refiera concretamente á los derechos de los interesados. Véase, por tanto, **ACREEDORES, CRÉDITOS, DEUDOR, GRADUACION DE CRÉDITOS**, etc.

Aun debemos hacer aquí otra indicacion, para fijar la estension con que vamos á tratar esta materia. Segun el tecnicismo legal y forense, cuando los procedimientos son motivados por obligaciones y deudas contraidas conforme al derecho comun, se da al juicio el nombre de *concurso de acreedores*; y el de *quiebra*, cuando se dirijen contra cualquiera persona que tenga la calidad de comerciante, y por obligaciones y deudas contraidas en el comercio (1). Aunque ambos juicios son análogos, y tienen un mismo fin, existen entre ellos diferencias importantes, tanto en el fondo, como en la forma, exigidas por las diferentes condiciones de unos y otros deudores: en tales casos, se supone en el comerciante el abuso del crédito y de la buena fé, tan esenciales para el comercio, y por eso le trata la ley con mas severidad que al deudor comun. Por estas consideraciones, á pesar de haberse suprimido, con el fuero, los procedimientos especiales para los asuntos de comercio, sujetándolos á la ley comun y á la jurisdiccion ordinaria, se han conservado los relativos á los juicios de quiebra, que ahora, como antes, han de arreglarse á las prescripciones del libro 4.° del Código de comercio, y al título 5.° de la ley de Enjuiciamiento mercantil, derogada en casi todo lo demás (2).

Todo ello exije, que reservemos, como procede, para el artículo **QUIEBRA** cuanto se refiere á la concurrencia de acreedores contra comerciantes por obligaciones mercantiles, y que limitemos el presente á la que tiene lugar contra deudores por obligaciones comunes, que es lo que concretamente se llama *concurso de acreedores*.

(1) Arts. 1014 y 1015 del Código de comercio.
(2) Art. 13 del decreto del Gobierno provisional de 6 de Diciembre de 1868, declarado ley por la de 20 de Junio de 1869; y art. 12 del de 1.° de Febrero de 1869, haciendo estensiva á las provincias de Ultramar la unidad de fueros, establecida por aquel en la Península.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Sec. I. Legislacion española.
Leyes de las Partidas.
Id. de la Novísima Recopilacion.
Ley de Enjuiciamiento civil.
Disposiciones posteriores.
Leyes de Indias.
Sec. II. Legislacion estranjera.

SECCION I.

Legislacion española.

LEYES DE LAS PARTIDAS.

LEY 1.ª, TÍT. 15, PART. 5.ª

Todo hombre libre puede desamparar sus bienes no teniendo con qué pagar lo que debe; y débelo hacer ante el juez, por sí ó por su procurador, confesando las deudas que debe, ó cuando fuere dada sentencia contra él, y no antes. Débelos desamparar á aquellos á quienes debe algo, diciendo la razon por qué no puede pagarles; y el juez debe tomar todos los bienes del deudor, sin dejarle mas que las ropas que vistiese, mandándolos vender en almoneda y entregar el precio de estos bienes á los acreedores. Esceptúanse los casos en que el deudor sea ascendiente, descendiente, marido, muger, patrono, liberto, consócio, ó donante del acreedor, pues entonces el juez debe dejar á cada uno de tales deudores tanta parte de sus bienes, de que pueda vivir moderadamente.

LEY 2.ª, ID., ID.

Siendo las deudas de una misma naturaleza, el juez debe partir entre ellas el importe de los bienes, dando á cada acreedor la parte proporcional que le corresponda, segun la cuantía de su crédito. Si las deudas no fuesen iguales, por haberlas preferentes ó privilegiadas, entónces deben estas pagarse en primer lugar, aunque nada quede para las demás. Si antes de la venta, el deudor pide ser oido para recobrar sus bienes y pagar, ó para defenderse contra sus acreedores, debe otorgársele con suspension de la venta.

LEY 3.ª ID., ID.

La cesion ó desamparo de bienes tiene tal fuerza, que despues no puede el deudor ser emplaza-

do, ni está obligado á responder en juicio á sus acreedores, á no ser que hubiese adquirido bienes bastantes para pagar y quedarle con que vivir. El fiador no puede defenderse con la cesion hecha por el deudor; sino que está obligado á completar el pago.

LEY 4.ª, ID., ID.

El deudor que, condenado en juicio, no paga ni desampara sus bienes, debe ser metido en prision hasta que haga lo uno ó lo otro. Si preso, malbaratase sus bienes, y quisiere despues desamparar-los, no debe ser oido, á no ser que se obligue, dando garantía, á restituirlos al estado que tenian cuando fué preso.

LEY 5.ª, ID., ID.

Si el deudor, antes de desamparar los bienes, reune á sus acreedores y les pide un plazo para pagar, debe tener aquel que le otorgue la mayor parte, aunque los demás no quisiesen concedérselo. Deben considerarse mayor parte, aquellos acreedores que representan mayor suma en las deudas. Habiendo desacuerdo en el plazo, si fueran iguales en deudas y en personas, valdrá la resolucion de los que lo concedan; y si fueren iguales en las deudas y desiguales en las personas, valdrá aquello que quisieren el mayor número de personas.

LEY 6.ª, ID., ID.

En caso de solicitar quita el deudor, si existiese desacuerdo, valdrá la opinion favorable, segun lo dicho en la ley anterior. Si algun acreedor no estuviese presente cuando la quita se otorga, valdrá lo convenido, y no lo podrá revocar el ausente, á no ser que el importe de su deuda fuese mayor que las de todos los demás. Si al conceder los acreedores la quita ó condonacion de parte de sus créditos, no estuviera presente algun otro á quien fuese obligada señaladamente alguna partida de los bienes del deudor, ó tuviese alguna cosa en prenda, no le perjudicará la quita concedida, quedando á salvo su derecho sobre los bienes obligados ó empeñados.

LEY 9.ª, ID., ID.

Antes de desamparar el deudor sus bienes, puede pagar á uno de sus acreedores y no se puede obligar á este á que devuelva lo recibido, aunque no reste para pagar á todos los demás; pero no puede hacerse esto, ni aun judicialmente, despues de desamparados los bienes: lo pagado en este caso debe volver al cuerpo de bienes para repartirlo entre los acreedores, segun proceda.

LEY 10, ID., ID.

El deudor que huye de sus acreedores, puede ser detenido por cualquiera de ellos, con todo lo que le pertenezca, donde no haya autoridad judicial; pero donde la hubiere, tiene que acudir á ella; y puede retener para sí cuanto se encontrare al deudor, hasta el importe de su crédito, siendo el sobrante para los demás acreedores.

NOVÍSIMA RECOPILACION.

LEY 8.ª, TIT. 32, LIB. 11.

D. Cárlos I y Doña Juana, por pragm. de 18 de Junio de 1538.

Si los condenados por hurtos, que no tengan bienes con que pagar á las partes sus intereses, hacen cesion de los que tengan, se les admita por las justicias, aunque la deuda proceda de delito, segun ha lugar por las leyes del reino en las otras deudas.

LEY 7.ª, ID., ID.

D. Felipe II, por pragm. de 18 de Julio de 1590.

Cualquier deudor, mercader ó cambiante, que hiciere cesion de sus bienes, ó compromisos para remision ó espera de sus deudas, aunque no se ausente ni oculte sus bienes, «sea preso y esté con prisiones en la cárcel pública; las cuales no se le puedan quitar, ni pueda ser suelto ni dado en fiado por ninguna manera, así por las justicias ordinarias como por los jueces y tribunales superiores, hasta tanto que los dichos pleitos de acreedores, y compromisos y convenios, y lo que sobre ello se hubiere de juzgar y determinarse, se acaben y fenezcan de todo punto ó por todas instancias; y siendo acabados, el dicho deudor que ansi estuviere preso, haya dado y diere fianzas legas, llanas y abonadas de pagar sus deudas á plazos y tiempos, y en la cantidad que por la mayor parte de los dichos acreedores en número ó cantidad les fueren dados, con que los dichos plazos no puedan esceder de cinco años; y ninguna persona pueda ser oida sobre y en razon de todos los dichos pleytos, ó cualquier dellos, hasta que esté preso y con prisiones en la cárcel pública, como dicho es: y antes que sea oido el que ansí estuviere preso, sea obligado á manifestar y entregar luego todos sus libros, y dé memorial jurado de todos sus bienes, derechos y acciones que tuviere, y todas las deudas que le debieren, y de las que él debiere, sin encubrir cosa ninguna de todo lo suso dicho; todo lo cual se deposite luego en persona lega, llana y abonada que beneficie los dichos bienes, y cobre las deudas que le debieren: y

y si el tal deudor encubriere alguna cosa de sus bienes, ó dexare de poner en el dicho memorial alguna cosa dellos, ó de las deudas que le debieren, ó pusiere algun acreedor fingido, ó pagare alguna cantidad de secreto ó algun acreedor, para que venga y consienta en algunas remisiones y esperas ó compromisos, siéndole probado cualquiera de las cosas suso dichas, sea habido por alzado, é incurra en la pena puesta por la ley segunda de este título contra los mercaderes y cambios que se alzan ó encubren sus bienes.....»

LEY 9.ª, ID., ID.

Los arrendadores de rentas reales, y sus fiadores y abonadores no puedan hacer cesion de bienes: juren no hacerla, ni pedir relajacion del juramento; y si la hicieren, no les valga, y estén presos hasta que cumplan y paguen lo que deban por razon de dichas rentas.

LEY 10, ID., ID.

D. Felipe II, en las Córtes de Madrid de 1598, publicadas en 1604, pet. 14.

En los pleitos de acreedores, que por el Consejo, Chancillerías ó Audiencias se sentencien en primera ó segunda instancia, confirmando ó revocando las sentencias de los jueces inferiores, sin embargo de la suplicacion, y sin esperar tercera sentencia, sean pagados los acreedores por su antelacion, dando fianzas depositarias de restituir lo que así cobraren, si la tal sentencia se revocare en grado de revista.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Aprobada por Real decreto con fuerza de ley de 5 de Octubre de 1855.

TÍTULO XI.

De los concursos de acreedores.

SECCION PRIMERA. — *Del concurso voluntario de acreedores.*

«Art. 505. El juez del domicilio del que se presente en concurso voluntario, es el competente para conocer de este juicio.

Art. 506. El que se presente en concurso voluntario, debe acompañar á su solicitud:

1.° Relacion firmada de todos sus bienes, hecha con individualidad y exactitud. Solo se esceptuarán de ella los bienes que, con arreglo al artículo 951, no pueden ser objeto de ejecucion.

2.° Un estado de las deudas, con espresion de su procedencia y de los nombres y domicilios de los acreedores.

3.° Una memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su presentacion en concurso.

Sin estos documentos no se admitirá ninguna solicitud de concurso voluntario.

Art. 507. Si el deudor solicita quita y espera, ó cualquiera de las dos cosas, el juez mandará inmediatamente convocar á junta de acreedores.

Al efecto señalará término bastante para que puedan concurrir todos los que residan en la Península, designando el dia, hora y sitio en que deba verificarse la junta.

Art. 508. La citacion, que será individual para los acreedores espresados en el estado de deudas, se hará en la forma que está prevenida en los artículos 228 y siguientes para los emplazamientos del juicio ordinario.

Art. 509. Se publicará además la citacion en los periódicos del pueblo en cuyo juzgado radicare el juicio, en el *Boletin* de la provincia, y cuando la importancia y circunstancias del concurso lo exigieren á juicio del juez, en la *Gaceta de Madrid*.

Art. 510. Tanto en las cédulas de citacion, como en los edictos, se prevendrá que los acreedores se presenten en la junta con el título de su crédito, bajo apercibimiento de no ser admitidos de lo contrario.

Art. 511. La junta se celebrará en el dia señalado bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano actuario. Se dará principio á ella por la lectura de los artículos de esta ley, que se refieran al objeto de su convocacion, de la solicitud que la haya motivado, y de la relacion, estado y memoria que la acompañen: despues de haber hablado dos acreedores en contra y dos en pró, si se hubiere pedido la palabra en estos sentidos, y el deudor ó su representante, si concurren, las veces que consideren necesarias, podrá cerrarse el debate, acordándolo así la mayoría de asistentes; y en seguida el juez pondrá á votacion la espera ó la quita, formulando la cuestion que haya de votarse en términos claros y precisos.

Las votaciones serán siempre nominales y se consignarán en el acta que se estienda.

El voto de la mayoría formará el acuerdo.

Para que haya mayoría se necesita precisamente:

1.° Que se reunan dos terceras partes de votos de los acreedores concurrentes á la junta; y

2.° Que los créditos de los que concurran con sus votos á formar la mayoría importen cuando menos las tres quintas partes del total pasivo del concurso.

Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos de funeral, ordenacion de última voluntad, y prevencion de testamentaría ó ab-intes-

tato, así como los hipotecarios legales y por contrato, pueden abstenerse de tomar parte en esta votacion.

Si se abstuvieren, no quedan obligados á estar y pasar por lo acordado.

Si tomaren parte en la votacion, quedarán obligados como los demás acreedores.

Art. 512. Si el acuerdo fuere denegatorio de la quita ó espera, queda concluido el juicio, y en libertad los interesados para hacer uso de los derechos que puedan corresponderles.

Art. 513. Si el acuerdo fuere favorable al deudor, podrá ser impugnado dentro de ocho dias siguientes al de la junta, por cualquier acreedor que no haya concurrido, ó que haya disentido y protestado contra el voto de la mayoría.

Las únicas causas por que pueden ser impugnados los acuerdos sobre quita ó espera, son:

1.° Defecto en las formas establecidas para la convocacion, celebracion y deliberacion de la junta.

2.° Falta de personalidad ó representacion en alguno de los que hayan concurrido con su voto á formar la mayoría.

3.° Inteligencias fraudulentas entre uno ó mas acreedores y el deudor para votar á favor de la quita ó la espera.

4.° Exajeracion fraudulenta de créditos para procurar mayoría de cantidad.

Art. 514. Pasados los ocho dias sin haberse hecho oposicion, traerá el juez los autos á la vista y dictará providencia, mandando llevar á efecto el convenio y condenando á los interesados á estar y pasar por él.

Dictará tambien para su ejecucion las providencias que correspondan, á instancia siempre de parte legítima.

Art. 515. La providencia en que se mande llevar á efecto el convenio no es apelable por ninguno de los que hayan sido citados personalmente para la junta, y no lo hayan impugnado en los términos prevenidos en el art. 513.

Queda á salvo su derecho para impugnarlo á los que no hayan sido convocados personalmente.

Esto no obstante, si á instancia del deudor se les hubiere notificado el acuerdo, y no protestaren contra él en el acto ó dentro de los cinco dias siguientes, será obligatorio para ellos, del mismo modo que para los que han sido convocados personalmente y no han reclamado en debida forma.

Art. 516. Al hacerse la notificacion de que habla el párrafo último del artículo anterior, se enterará al acreedor de lo que en él se dispone, haciéndolo constar en la misma diligencia, bajo pena de nulidad.

Art. 517. La oposicion se sustanciará en via ordinaria.

Serán parte en ella los que la hayan formulado y los acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la junta. Tambien podrá ser parte el deudor.

Los que sostengan el acuerdo de la junta litigarán unidos bajo una misma direccion y representados por un solo procurador. Lo mismo harán los opositores, si fueren varios.

Esta disposicion es estensiva al deudor si se presentare en el pleito, en cuyo caso litigará con los que sostengan sus mismas pretensiones.

Art. 518. La providencia que recayere es apelable en ambos efectos.

Art. 519. Cuando se pida simplemente la formacion de concurso, se acomodará la sustanciacion á las reglas establecidas para el concurso necesario.

Art. 520. Los incidentes que en este juicio de concurso y sus piezas separadas puedan ocurrir, se sustanciarán de la manera prevenida respecto á los que tengan lugar en el ordinario.

SECCION SEGUNDA.—*Del concurso necesario.*

Art. 521. La formacion del concurso necesario de acreedores solo podrá decretarse á instancia de parte legítima, y con tal que se acrediten los dos estremos siguientes:

1.° Que haya dos ó más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor.

2.° Que no se hayan encontrado en todas ó en alguna de ellas bienes libres de otra responsabilidad conocidamente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame.

Art. 522. Cualquiera de los jueces que estén conociendo de las ejecuciones, es competente para declarar el concurso.

Si alguno de ellos fuere el del domicilio del deudor, y éste ó el mayor número de sus acreedores lo reclamasen, deberán remitírsele los autos para la continuacion del juicio con preferencia á los demás jueces.

Art. 523. Declarado el concurso, se notificará al deudor y se oficiará á los jueces que conozcan de los demás pleitos ejecutivos, á fin de que los remitan para su acumulacion al juicio universal.

Art. 524. En el juzgado en que se declare el concurso, dictará el juez las providencias necesarias para el embargo y depósito de todos los bienes del deudor, la ocupacion de sus libros y papeles, y la retencion de su correspondencia.

Art. 525. El depositario deberá ser persona de crédito y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado.

Art. 526. Además de la custodia de los bienes, será obligacion del depositario:

1.° Administrar los bienes del concurso.

2.° Cobrar cualesquiera créditos que tuviere el deudor.

3.° Proponer al juez la enajenacion de los efectos que no puedan conservarse.

Art. 527. El deudor abrirá la correspondencia en presencia del juez y escribano, y recibirá en el acto la que no se refiera á sus bienes ó negocios, reteniéndose hasta su dia la que trate de ellos.

Si por el resultado de la correspondencia fuere necesario adoptar alguna medida urgente para la seguridad de los bienes, lo hará el juez con conocimiento del deudor.

Art. 528. La cobranza de los créditos se hará obteniendo préviamente la vénia del juzgado, que se consignará, bajo la firma del juez y del escribano, en los títulos de los mismos créditos.

La venta se hará con las formalidades que se prevendrán para las que hayan de ejecutar los síndicos.

Art. 529. Los fondos recaudados se depositarán en el establecimiento público destinado al efecto.

Art. 530. El juez señalará dietas al depositario. Estas no podrán pasar de cincuenta reales diarios, teniendo para ello en consideracion la entidad y circunstancias de los bienes confiados á su custodia.

Se le abonarán además:

1.° Medio por ciento sobre la cobranza de créditos.

2.° Uno por ciento sobre el producto líquido de la venta de frutos, ó bienes muebles ó semovientes que se enajenen.

3.° Cinco por ciento sobre los productos líquidos de la administracion, que no procedan de las causas espresadas en los párrafos anteriores.

Art. 531. El deudor puede oponerse á la declaracion del concurso dentro de los tres dias siguientes al en que le haya sido notificada.

Pasados los tres dias sin oponerse, se estimará consentida la declaracion.

Art. 532. Si el deudor formalizare oposicion, se sustanciará ésta con el acreedor á cuya instancia se haya hecho la declaracion de concurso.

Unidos al deudor, bajo una misma direccion y representados por el mismo procurador, litigarán los acreedores que se opusieren como él á la formacion del concurso.

En los propios términos litigarán, unidos al acreedor ó acreedores á cuya instancia se haya hecho la declaracion, los demás que quieran sostenerla.

Art. 533. Mientras se sustancia y decide la oposicion, continuarán ejecutándose las medidas adoptadas para el embargo y depósito de los bienes, ocupacion de libros y papeles, retencion y exámen de la correspondencia.

Art. 534. La sustanciacion de la oposicion á la declaracion de concurso se acomodará á los trámites establecidos para el juicio ordinario, con las siguientes modificaciones:

1.° Los traslados serán por tres dias improrogables.

2.° Solo habrá prueba por conformidad de los interesados, ó en su defecto cuando el juez lo considere necesario.

3.° El término de prueba será de diez dias improrogables.

4.° Publicadas las pruebas, se dictará sentencia sin alegatos ni vista pública.

5.° Si se interpusiere apelacion, se admitirá en ambos efectos, y sustanciará del modo prevenido en los artículos 840 y siguientes de esta ley.

Art. 535. Fallados los autos por el tribunal superior, se devolverán al juzgado de primera instancia con certificacion de la sentencia sin ningun otro inserto, salvo el de la tasacion de costas, si hubiere habido condena.

Art. 536. Si se revocare el auto de declaracion de concurso, se alzará la intervencion y se hará entrega al deudor por el depositario y escribano de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia retenida.

El mismo depositario, si hubiere desempeñado actos de administracion, rendirá cuentas al deudor.

Art. 537. Queda su derecho á salvo al mismo deudor para reclamar del acreedor, á cuya instancia se haya declarado el concurso, la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados, si al solicitarlo se hubiere procedido con dolo ó falsedad.

Art. 538. Consentida ó ejecutoriada la declaracion de concurso, el juez mandará hacer saber al concursado que en el término de segundo dia presente relacion de sus acreedores con la oportuna manifestacion de las causas de su estado.

Mandará tambien fijar edictos en los sitios públicos é insertarlos en los periódicos del pueblo, si los hubiere, en el *Boletin* de la provincia, y si el juez lo creyere conveniente, atendidas la importancia y circunstancias del concurso, en la *Gaceta de Madrid*, anunciándolo y llamando á los acreedores, á fin de que se presenten dentro de veinte dias con los títulos justificativos de sus créditos.

Art. 539. Trascurridos los veinte dias, convocará el juez á junta general de acreedores para el nombramiento de síndicos.

Art. 540. La convocacion se hará por cédula á los acreedores que se hayan presentado, y á los demás por edictos, que se publicarán en la forma antes establecida en el art. 509.

En las cédulas y edictos se señalarán el dia, hora y sitio de la reunion, la cual no tendrá efecto hasta pasados veinte dias desde la fecha de la convocatoria.

Art. 541. En el dia señalado se procederá á celebrar la junta bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano.

Sólo podrán concurrir á ella los acreedores que hayan presentado los títulos de sus créditos, ó que los presenten en el acto.

Principiará la sesion leyéndose las disposiciones de esta ley que tienen relacion con el nombramiento de síndicos y su impugnacion: continuará dándose cuenta de todos los antecedentes de la declaracion, de las diligencias de ocupacion de bienes y papeles, y de cualesquiera otros incidentes que hayan tenido lugar.

Hecho esto, se procederá al nombramiento de síndicos, quedando elegidos los que lo hayan sido por la mayoría en la forma prevenida en el artículo 511.

Si en el primer escrutinio no reuniere ninguno las mayorías de número y cantidades, se procederá á nueva votacion entre los cuatro que se hayan acercado más á una y otra mayoría.

Cuando en este segundo escrutinio tampoco reuniere ningun acreedor dichas dos mayorías, quedará elegido el que haya sido designado por la mayoría relativa de votos y el que hubiere tenido en su favor la mayoría tambien relativa de cantidad.

Caso de que en el primer escrutinio hubiere reunido un acreedor las dos mayorías, se repetirá la votacion para el nombramiento del otro síndico; y si nadie las obtuviere, se entenderá nombrado el que, habiendo tenido en su favor una de ellas, sea interesado personalmente por mayor suma en el concurso.

Art. 542. La eleccion ha de recaer necesariamente en acreedores que se hallen presentes, que lo sean por derecho propio y no en representacion de otro, y que no tengan conocida preferencia ó la pretendan.

Solo á falta de acreedores por derecho propio podrán ser elegidos los representantes de otros.

Si no hubiere más que acreedores conocidamente preferentes, ó que sostengan serlo, y representantes de otros comunes, la eleccion deberá recaer en estos

Art. 543. En cada concurso se nombrarán dos síndicos.

Este número podrá aumentarse al de tres por acuerdo de dos terceras partes de los acreedores concurrentes á la junta.

Art. 544. Los síndicos tienen colectivamente derecho á la siguiente retribucion de sus servicios, que dividirán entre sí por iguales partes, si no hubieren convenido cosa en contrario.

Sobre la realizacion de cualesquiera efectos públicos, créditos, ó derechos del concurso, medio por ciento.

Sobre el producto líquido de ventas de alhajas, frutos, muebles ó semovientes, dos por ciento.

Sobre el producto líquido de venta de bienes raíces, uno por ciento.

Sobre los productos líquidos de la administracion que no procedan de las causas espresadas en los párrafos anteriores, cinco por ciento.

Si con motivo del desempeño de su encargo tuvieren que hacer algun viaje, se les abonarán los gastos que les ocasionare, en virtud de providencia del juez y de mandamiento que se librará al efecto.

Art. 545. La eleccion de los síndicos podrá ser impugnada por los acreedores ó por el deudor.

Si lo fuere, se formará pieza separada, en la cual se sustanciará la oposicion en los términos espresados en el art. 534, con la sola variacion de que la apelacion de la sentencia que recaiga se admitirá en un solo efecto.

Art. 546. No se suspenderá la sustanciacion del juicio de concurso por la oposicion al nombramiento de síndico.

Art. 547. Nombrados los síndicos, se les pondrá en posesion, y se les dará á reconocer donde fuere necesario. Su nombramiento se publicará además por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre, é insertarán en los periódicos oficiales en que se hubiere insertado la convocatoria para su nombramiento.

En estos edictos se prevendrá que se haga entrega á los síndicos de cuanto corresponda al concursado.

Art. 548. El juicio en adelante seguirá en tres piezas separadas.

La primera, que será la que contenga las actuaciones anteriores, se denominará de *Administracion del concurso*: en ella se sustanciarán los incidentes que se refieran á la misma administracion.

La segunda se destinará al reconocimiento y graduacion de créditos.

La tercera á la calificacion del concurso.

Pieza primera.

Art. 549. Publicado el nombramiento de los síndicos, se les hará entrega por inventario de los bienes, libros y papeles del concurso.

El dinero que hubiere continuará depositado en el establecimiento destinado al efecto, á disposicion del juez que conozca del juicio; entregándose á los síndicos el resguardo ó resguardos del depósito, bajo recibo, que se estenderá en esta pieza.

Art. 550. En el dia último de cada mes presentarán los síndicos un estado ó cuenta de administracion, la cual se unirá á esta pieza, y el juez dispondrá bajo su responsabilidad que las existencias en metálico que resulten, se depositen en la forma antes establecida.

Art. 551. La pieza primera se hallará siempre en la escribanía á disposicion de los acreedores que quieran reconocerla.

Art. 552. El juez podrá por sí, ó á instancia de los acreedores ó del deudor, corregir cualquier abuso, adoptando cuantas medidas considere necesarias al efecto, inclusa la de suspender al síndico ó síndicos que puedan haberlo cometido.

En este último caso convocará á junta de acreedores para que determinen lo que crean mas conveniente.

Art. 553. El juez podrá dejar en poder de los síndicos la suma que se juzgue necesaria para los gastos del concurso, mandando en caso necesario estraerla del depósito.

Art. 554. En esta misma pieza se actuará todo lo relativo á la enajenacion de los bienes del concurso, á la cual se procederá inmediatamente si la mayoria de los acreedores, computada del modo espresado en el art. 511, no acordare lo contrario.

Art. 555. Si los bienes fueren alhajas, frutos, semovientes, muebles ó raices, la venta se hará en público remate.

Si fueren efectos públicos ó valores de otra cualquier clase, por medio de agente ó corredor nombrados al efecto por el juez.

Art. 556. A la subasta de los bienes comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, precederá su avalúo por peritos nombrados uno por los síndicos, otro por el deudor, y en caso de discordia un tercero por el juez.

Para la eleccion del tercero se arreglará el juez á lo prevenido en el art. 303 de esta ley.

Hecho el avalúo, se anunciará la subasta por edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los periódicos oficiales, si los hubiere en el pueblo en que radique el juicio, y en que estuvieren situados los bienes, señalándose el dia, sitio y hora del remate.

En los casos en que el valor de alguno ó algunos bienes inmuebles lo requiera, se hará tambien el anuncio en la *Gaceta de Madrid*.

Art. 557. Entre el anuncio de la subasta y el remate deberán mediar al ménos quince dias, si los bienes son alhajas, frutos, semovientes ó muebles; y treinta, si raices.

Art. 558. En casos urgentes y por circunstancias especiales se podrán abreviar estos términos de consentimiento de los síndicos y oyendo al deudor.

Art. 559. Sin el acuerdo de los síndicos y del deudor no se podrá admitir en las subastas postura inferior á las dos terceras partes del avalúo.

Estando conformes, será admitida; pero el juez convocará á junta de acreedores para que decida sobre su aprobacion lo que estime conveniente.

Esto no tendrá aplicacion cuando los síndicos estuvieren autorizados por la junta de acreedores para admitir proposiciones inferiores á las dos terceras partes del avalúo, en cuyo caso su conformidad y la del deudor bastarán para que sean aprobadas.

Art. 560. Hecho y aprobado el remate, se procederá en los casos en que corresponda á otorgar las oportunas escrituras en favor del rematante.

Los síndicos suscribirán estas escrituras.

Art. 561. El precio de las ventas se constituirá en depósito de la manera antes prevenida.

Art. 562. Si no hubiere postura admisible, se procederá á la retasa de los bienes en la forma establecida para el primer avalúo; y se repetirá la subasta en iguales términos que la anterior.

Art. 563. Si en esta subasta no hubiere tampoco postura admisible, se convocará á junta de acreedores para que acuerden la manera en que los bienes hayan de adjudicarse.

Art. 564. La adjudicacion se hará por las dos terceras partes del último avalúo, á no convenir en otra cosa los acreedores y el deudor.

Art. 565. Hecho el pago de todos los créditos, ó de la parte de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á cubrir, los síndicos rendirán una cuenta general, que estará de manifiesto en la escribanía durante quince dias á disposicion del deudor y de todos los acreedores.

Art. 566. Trascurridos los quince dias sin hacerse oposicion, el juez aprobará la cuenta y mandará dar á los síndicos el oportuno finiquito.

Art. 567. Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta se sustanciarán en vía ordinaria con los síndicos.

En este juicio, los que sostengan una misma causa litigarán unidos y bajo la misma direccion.

Art. 568. Aprobada la cuenta de los síndicos, ó rectificada en su caso, se hará entrega al deudor de los bienes que hubieren quedado despues de pagar los créditos, y de sus libros y papeles.

Art. 569. Si no hubieren sido pagados por entero los créditos, se conservarán en la escribanía los libros y papeles unidos á los autos, á los efectos sucesivos.

Art. 570. El resultado definitivo del concurso se notificará á los acreedores reconocidos por medio de cédula, que se dejará en sus habitaciones respectivas, é insertará en los periódicos en que se haya publicado la declaracion del concurso.

Art. 571. En el auto en que se ordene la publicacion del resultado definitivo del concurso se declarará la rehabilitacion del concursado sin necesidad de instancia suya, ni de audiencia de ningun género, en el caso de haber sido pagados por entero los créditos y de haberse declarado la inculpabilidad del mismo concursado.

Art. 572. La pieza de administracion se subdividirá en los ramos separados que sean necesarios para la claridad y mejor direccion del concurso.

Pieza segunda.

Art. 573. Puestos los síndicos en posesion de los bienes, y hecha la entrega á los mismos de los libros y papeles, se formará la pieza de reco-

nocimiento y graduacion de los créditos. A ella se unirá testimonio literal del estado de las deudas presentado por el deudor.

Formada que sea esta pieza, se dispondrá la convocacion de una junta general para el exámen de los créditos.

Esta junta se convocará con sujecion á lo prevenido en los arts. 508 y 509 de esta ley.

Entre la convocacion y la celebracion de la junta deberán mediar treinta dias.

Art. 574. Los síndicos formarán, prévio el exámen de los títulos presentados, para dar cuenta á la junta, un estado de todos los créditos, otro de los que en su opinion deban ser reconocidos, y otro de los que no deban serlo.

Art. 575. Reunida la junta bajo la presidencia del juez, y con asistencia del escribano, se leerán los artículos de esta ley relativos al reconocimiento de créditos y á la manera de impugnar los acuerdos hechos sobre él, y se dará cuenta de los estados á que se refiere el artículo precedente, los cuales se pondrán á discusion partida por partida.

Art. 576. Sobre cada una de las partidas deberá votarse, quedando reconocidos ó escluidos los créditos por mayoría, que habrá de constituirse de la manera prefijada en el art. 511.

Si no llegaren á reunirse las mayorías de votos y cantidades, el juez, concluida la junta, llamará los autos á la vista y determinará lo que crea mas arreglado á derecho sobre el crédito á que se refiera la disidencia.

Art. 577. Podrá acordarse en la junta dejar pendiente el reconocimiento de cualquier crédito, que no se presente bastantemente justificado.

En este caso, el interesado completará su justificacion en el tiempo que trascurra hasta la junta en que se gradúen los créditos.

Art. 578. Concluida la junta, se estenderá por el escribano un acta de lo que en ella haya ocurrido.

Esta acta deberá firmarse por el juez, por el escribano, por los acreedores concurrentes y por el deudor ó su representante, si asistiere.

Art. 579. Terminada la junta, los acreedores residentes en el territorio español de la Península, en las posesiones españolas de Africa ó en las Islas Baleares, que hasta este momento no hayan comparecido en el juicio, se considerarán como morosos.

Art. 580. Los efectos legales de la morosidad son:

1.° Que el que haya incurrido en ella costee el reconocimiento de su crédito, si lo solicita con posterioridad.

2.° Que pierda cualquiera prelacion que pueda corresponderle.

3.° Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle correspondido en cualesquiera dividendos, hechos antes de su presentacion, no teniendo derecho á participar mas que de los que se ejecuten en adelante.

Art. 581. Si entre la presentacion y el reconocimiento se repartiere algun dividendo, serán comprendidos en él, reteniendo en depósito las sumas que les correspondan.

Estas sumas serán entregadas á los tenedores de los créditos si son reconocidos: si no lo fueren, acrecerán á la masa del concurso.

Art. 582. Los acreedores que residan en las Islas Canarias, cualquiera que sea la forma en que hayan sido convocados, no incurrirán en morosidad hasta despues de celebrada la junta de graduacion: á los que en adelante se presentaren, se aplicarán las disposiciones de los dos artículos que anteceden.

Art. 583. Los acreedores residentes en las provincias de Ultramar ó en cualesquiera otros paises no incurrirán en pena alguna aun despues de celebrada la junta de graduacion. Si se presentaren en adelante, deberán ser reconocidos sus créditos, si son legítimos, y graduados por providencia que se dicte, oyendo á los síndicos y al concursado en ramo separado; conservarán la preferencia que pueda corresponder á sus créditos y serán reintegrados en el lugar que se les señale. Pero en ningun caso se podrá obligar á los demás acreedores á que devuelvan lo que tuvieren recibido.

Si fueren graduados sus créditos de comunes, se les igualará con todos los de la misma clase; y hecho esto, concurrirán á prorata con ellos á participar del haber del concurso, que esté aun por dividir.

Art. 584. A los acreedores reconocidos se dará un documento firmado por los síndicos con el visto bueno del juez. Este documento espresará la importancia, origen y reconocimiento del crédito.

A los acreedores cuyo crédito no haya sido reconocido, se comunicará por los síndicos la decision de la junta por medio de carta particular que el escribano pondrá por sí mismo en el correo.

Se estenderá en esta pieza la oportuna certificacion de haberse hecho, y copia de la carta circular.

Art. 585. Los acuerdos de estas juntas y las determinaciones que el juez dictare en los casos en que no se reunan las dos mayorías, pueden ser impugnados dentro de quince dias por los acreedores no concurrentes á ella, ó por los que hayan disentido del voto de la mayoría y protestado en el acto que les quede su derecho á salvo para hacerlo.

Art. 586. Pasados los quince dias sin que haya impugnacion, quedan firmes los acuerdos, ó determinaciones del juez en su caso, y no se dará curso á ninguna reclamacion contra ellos.

Art. 587. Sobre cada una de las impugnaciones que se intenten se formará ramo separado, que se sustanciará con los síndicos en vía ordinaria.

Art. 588. Los síndicos están en la obligacion de sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario.

Art. 589. Si el crédito de algun síndico no fuere reconocido, cesará de hecho en el ejercicio de sus funciones. Lo mismo sucederá si impugnare en cualquier sentido alguno de los acuerdos de la junta.

En uno y otro caso se procederá á su reemplazo en la forma establecida en los artículos 539 y siguientes.

Art. 590. El deudor puede ser parte en los ramos separados que se formen. Si sostuviere lo acordado, litigará en union con los síndicos; si lo impugnare, en union con el acreedor que lo haya hecho, y en ambos casos bajo la misma direccion.

Art. 591. Pasados los quince dias señalados para la impugnacion de los acuerdos de las juntas de reconocimiento, se convocará otra de los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos, para su graduacion.

Esta citacion se hará por cédulas.

Se anunciarán además el dia, hora y sitio en que la junta deba verificarse, en los periódicos oficiales, ó de avisos si los hubiere, y cuando el juez lo considere conveniente, en la *Gaceta de Madrid*.

Entre la citacion y la celebracion de la junta deberán mediar quince dias.

Art. 592. Los síndicos, dentro de los treinta dias mencionados, formarán cinco estados, que comprenderán:

El primero, los acreedores por trabajo personal y por alimentos.

Si se tratare de un ab-intestato ó testamentaría concursada, se colocarán en este lugar, y tendrán derecho preferente á cualquiera otro, los acreedores por los gastos de funeral, proporcionado á la fortuna y circunstancias del finado, y por los ocasionados con motivo de la ordenacion de su última voluntad, y formacion de inventario y diligencias judiciales á que haya dado lugar la testamentaría ó ab-intestato.

El segundo, los hipotecarios legales, segun el órden establecido por derecho.

El tercero, los que lo sean por contrato, segun su antigüedad.

El cuarto, los escriturarios.

El quinto, los comunes.

Art. 593. Por separado formarán nota de los bienes de cualquiera clase que el concursado tuviere en su poder correspondientes á terceras personas, con espresion de los nombres de sus dueños.

Si los dueños se hubieren presentado reclamándolos, se les entregarán, conviniendo en ello los síndicos y el concursado. Si alguno no conviniere, se sustanciará la reclamacion en ramo separado y vía ordinaria.

Art. 594. Reunida la junta en el dia señalado, bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano, se principiará la sesion por la lectura de todos los artículos de esta ley relativos á la graduacion de créditos, y á la impugnacion de los acuerdos de los acreedores respecto á este punto.

Se pasará á deliberar sobre el reconocimiento de los créditos que haya podido quedar pendiente, respecto á cuya justificacion deberán los síndicos presentar dictámen por escrito.

Se dará despues cuenta de los estados de graduacion, y se pondrán á discusion los créditos que comprendan.

Terminada esta discusion, se someterá á votacion el dictámen de los síndicos respecto á cada crédito, quedando aprobado lo que determinaren las mayorías de votos y cantidades combinadas, en la forma establecida en el art. 511.

Art. 595. Si no se reunieren las dos mayorías, llamará el juez los autos á la vista y determinará lo que crea conforme á derecho sobre el crédito que haya dado lugar á la disidencia.

Art. 596. Los acuerdos de estas juntas, como igualmente las determinaciones que los jueces dictaren en los casos en que no se reunieren las dos mayorías, pueden ser impugnados dentro de ocho dias desde su fecha por los acreedores reconocidos no concurrentes á las mismas juntas, ó que hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo.

Art. 597. Pasados los ocho dias, no se dará curso á ninguna impugnacion contra los acuerdos de la junta ó decisiones del juez.

Art. 598. Sobre cada una de las impugnaciones se formará ramo separado, si son diferentes los créditos impugnados. Se sustanciarán en vía ordinaria, y los síndicos deberán sostener el acuerdo de la junta.

Art. 599 Si un mismo acreedor impugnare varios acuerdos, ó varios acreedores un mismo acuerdo, se sustanciarán todas estas oposiciones en un mismo ramo, y siempre con los síndicos.

Art. 600. El acreedor cuyo crédito sea objeto de la impugnacion, puede, en union de los síndicos, y bajo una misma direccion, sostener lo acordado respecto á él.

Art 601. En estos ramos separados no será el deudor admitido como parte.

Art. 602. Pasados los ocho dias señalados para la impugnacion de los acuerdos de las juntas de graduacion, sin haber sido impugnados, se procederá al pago de los créditos por el órden establecido, espidiendo los oportunos mandamientos

contra el depositario de los fondos para que se verifique.

Al entregar estos mandamientos al acreedor se le recojerá el documento de reconocimiento que se le facilitara por los síndicos, el cual, con los títulos que haya presentado de su crédito, se unirá á esta pieza, estendiéndose nota espresiva de quedar cancelado á consecuencia del pago mandado hacer.

Art. 603. Si hubiere impugnacion á alguna ó algunas graduaciones, se retendrá el importe de los créditos á que se refieran hasta que recaiga sobre ellas ejecutoria; y las sumas retenidas se aplicarán segun su resultado.

Pieza tercera.

Art. 604. Hecho el nombramiento de los síndicos, se les entregará la pieza primera de los autos, donde se hallen la relacion, estado y memorias presentadas por el deudor, para que dentro de treinta dias, y prévio el exámen de sus libros y papeles, manifiesten en esposicion razonada y documentada el juicio que hayan formado del concurso y de sus causas.

Art. 605. Con testimonio literal de la relacion, estado y memoria presentados por el deudor, y la esposicion razonada de los síndicos original, se formará la pieza tercera; y acumulada á ella provisionalmente la primera, se pasará todo al promotor fiscal del juzgado, para que si encontrare algun delito ó falta los persiga con arreglo á las leyes.

Art. 606. Si el dictámen del promotor fiscal fuere conforme al de los síndicos y favorable al concursado, el juez mandará traer los autos á la vista, y podrá, si así lo estima, declarar la inculpabilidad del concursado, ó adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones que estime convenientes á la administracion de justicia.

Art. 607. Si el dictámen del promotor fuere diverso del de los síndicos y favorable al concursado, se dará audiencia á este, y con vista de todo, el juez procederá en los términos espresados en el artículo anterior.

Art. 608. Si el dictámen del promotor fuere contrario al concursado, sea conforme ó distinto del de los síndicos, se procederá con arreglo á derecho, y segun la índole del delito ó falta que se encontrare.

Art. 609. Todos los acreedores tienen derecho á personarse en esta pieza y perseguir al concursado: si alguno ó algunos lo hicieren y sus gestiones tuvieren igual objeto que las de los síndicos, deberán litigar unidos y bajo una misma direccion.

Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán separadamente.

Art. 610. No se podrá imponer ninguna pena al concursado sin oirlo en forma; y desde el momento que estime el juez haber lugar á proceder contra él por cualquier clase de delito ó falta, se acomodará la sustanciacion de esta pieza al órden de proceder establecido para el juicio criminal.

SECCION TERCERA.—*Del convenio.*

Art. 611. En cualquier estado del juicio de concurso, pueden hacer los acreedores y el concursado los convenios que estimen oportunos.

Art. 612. El juez accederá á toda solicitud que se le dirija por el deudor ó por cualquier acreedor para convocacion á junta que tenga por objeto el convenio, siempre que el que la dedujere pague los gastos á que dé lugar.

Art. 613. La convocacion de junta para tratar de convenio lleva consigo la suspension del juicio de concurso, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas.

Art. 614. Cuando en la pieza tercera se haya pedido por los síndicos, por el promotor ó por cualquier acreedor que se declare fraudulento el concurso, no podrá hacer el deudor convenio ninguno con sus acreedores, hasta que haya recaido ejecutoria desestimando dicha calificacion.

Art. 615. La convocacion de la junta se hará por cédulas, que se dirigirán á los acreedores reconocidos, si tal fuere el estado del concurso, y por edictos que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los periódicos oficiales y de avisos del pueblo, si los hubiere, en el *Boletin* de la provincia, y si el juez lo creyere conveniente, en la *Gaceta de Madrid*.

En estas cédulas y anuncios se hará espresion del objeto de la junta, y se señalarán el dia, hora y sitio en que haya de celebrarse.

Art. 616. Entre la convocatoria y la celebracion de la junta deberán mediar á lo menos quince dias: el juez podrá ampliar este término hasta treinta, si las circunstancias del concurso lo exigieren.

Art. 617. Si la proposicion del convenio se hiciere antes de celebrarse la junta de exámen y reconocimiento de créditos, se dará cuenta de ella en la misma junta, sin necesidad de convocar ninguna otra.

Art. 618. Solo decidirán en esta junta, sobre la admision ó desestimacion de las proposiciones de convenio, los acreedores cuyos créditos sean en ella reconocidos.

Art. 619. La mayoría que haya de decidir sobre el convenio se constituirá en la forma prevenida en el art. 511.

Art. 620. No podrá tomar parte la mujer del concursado en la junta en que se trate de convenio.

Art. 621. Los dueños de cualesquiera bienes que tenga en su poder el concursado, y los acree-

dores que con arreglo á lo que queda determinado deban ser comprendidos en los estados primero, segundo y tercero de que habla el art. 592, no quedan ligados á lo convenido entre el deudor y sus otros acreedores, si se abstienen de tomar parte en la votacion.

Si no se abstienen, quedan sujetos como todos los demás.

Art. 622. Las juntas en que se trate de convenio se celebrarán bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano.

Principiarán por la lectura de todas las disposiciones de esta ley relativas al convenio entre el deudor y sus acreedores, y se dará despues cuenta de todos los antecedentes del concurso y de su estado, con inclusion del que tenga la pieza tercera.

Se pondrá en seguida á discusion, y votarán nominalmente las proposiciones que se hubieren presentado.

Hecha la votacion, se estenderá un acta que firmarán todos los concurrentes.

Art. 623. Si las proposiciones fueren desestimadas, continuará el juicio de concurso.

Art. 624. Si las proposiciones fueren aprobadas, se publicarán por edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los *Diarios* del pueblo, si los hubiere, ó en el *Boletin* de la provincia y en la *Gaceta de Madrid*, si en ella se hubiere publicado la convocatoria.

Tambien se comunicará por circular de los síndicos, de que quedará copia en los autos, á todos los acreedores reconocidos que no hayan concurrido á la junta.

Art. 625. Dentro de los veinte dias siguientes al de la fecha de los edictos, podrá ser impugnada la decision de la junta por los acreedores reconocidos, ó que tengan reclamacion pendiente para su reconocimiento, que no hayan concurrido; ó por los que, concurriendo, se hubieren separado del voto de la mayoría y protestado que les quedara su derecho á salvo.

Art. 626. Pasado el término referido, no podrá ser impugnada la decision por ningun acreedor residente en el territorio de la Península, en las posesiones españolas de Africa ó en las Islas Baleares.

Los que residieren en las Islas Canarias, que no hayan estado presentes en la junta, podrán impugnarla dentro de cuarenta dias, contados desde la fecha en que hayan sido publicadas las proposiciones de convenio.

A los que residieren en las posesiones españolas de Ultramar ó en paises estranjeros, que no hayan estado presentes en la junta, queda completamente á salvo su derecho é íntegro contra el deudor, no obstante el convenio.

Art. 627. Pasados los veinte ó cuarenta dias respectivamente sin haberse formulado oposicion, se mandará á instancia de parte legítima llevar á efecto lo convenido.

Art. 628. Las únicas causas porque puede impugnarse el acuerdo de las juntas convocadas para tratar de convenio, son las señaladas en el art. 513, respecto á los acuerdos de quita ó espera.

Art. 629. La impugnacion del convenio se sustanciará con el deudor y los síndicos en vía ordinaria, con las modificaciones espresadas en el art. 534, y litigando unidos y bajo una misma direccion los que sostengan las mismas pretensiones.

Art. 630. Si la impugnacion fuere desestimada por ejecutoria, se procederá á llevar á efecto el convenio.

Art. 631. Si fuere estimada y se declararen la nulidad ó ineficacia del convenio, continuará su marcha el juicio de concurso.

Los incidentes que ocurran en el juicio de concurso necesario se sustanciarán en la misma forma que los que tienen lugar en el juicio ordinario

SECCION CUARTA.—*Alimentos.*

Art. 632. Si el concursado reclamare alimentos, el juez, atendidas las circunstancias, señalará los que crea necesarios, solo en el caso de que á su juicio asciendan á más los bienes que las deudas.

La providencia concediendo ó negando alimentos solo tendrá el carácter de interina, y será inapelable.

Art. 633. Del señalamiento hecho interinamente por el juez se dará cuenta en la primera junta de acreedores que se celebre, la cual aprobará, modificará ó suprimirá los alimentos atendiendo á las circunstancias y necesidades del concursado. Pero no podrá dejar de concederlos cuando no aparezca claramente que los bienes no bastan á satisfacer las deudas.

Art. 634. Contra el acuerdo de la junta concediendo ó negando alimentos se oirá en juicio ordinario al deudor y á los acreedores que quieran impugnarlo, si deducen su accion dentro de los ocho dias despues del acuerdo.

No podrán hacer esta impugnacion los concurrentes á la junta, á no ser que hayan votado contra el acuerdo de las mayorías, y protestado que les quede su derecho á salvo.

El deudor y los que lo apoyen tendrán un solo procurador y una misma direccion en el juicio.

Esto es aplicable á los que lo impugnen en un mismo sentido.

Art. 635. Mientras está pendiente el juicio de alimentos, no los tendrá el concursado si el juez y la junta de acreedores hubieren estado conformes en negarlos; si el juez ó la junta los hubieren concedido, los percibirá, y si hubiere diferencia entre la cantidad fijada por aquel y por esta, se estará por la que la junta hubiere designado.»

DISPOSICIONES POSTERIORES.

REAL DECRETO DE 12 DE SETIEMBRE DE 1861 sobre papel sellado.

«Art. 25. En los juicios de..... concurso de acreedores y quiebra, se atenderá, para el uso del sello, en las piezas de autos generales en que conforme á la ley se dividen, al valor de la masa de bienes..... concursada, que préviamente señalará..... el deudor, y en su ausencia los acreedores que promuevan el concurso, segun los casos; mas en los juicios incidentales, que con motivo de los universales se susciten por los interesados, se tomará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamacion que cada uno entable.»

DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL

de 8 de Febrero de 1869 (1), elevado á ley por la de las Córtes Constituyentes de 20 de Junio siguiente.

En este decreto, hoy con fuerza de ley, espedido por el ministerio de Hacienda, se establecieron las bases generales á que deberán sujetarse las instituciones ó sociedades de crédito, que tengan por objeto operaciones de préstamos hipotecarios, ó de crédito territorial; y despues de dar reglas en los arts. 16 y 17 para el procedimiento de apremio contra los deudores por estos conceptos, dispone lo siguiente:

«Art. 18. El secuestro, y en su caso la enajenacion de las fincas hipotecadas, segun lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no se suspenderá por demanda que no se funde en algun título anteriormente inscrito, por la muerte del deudor, ni por la declaracion en quiebra ó concurso del mismo ó del dueño de la finca hipotecada. Vendida la finca, el comprador pagará á la institucion de crédito, dentro de ocho dias, todo lo que se le deba por razon de su préstamo, y el sobrante que resulte del precio quedará á disposicion de los tribunales para que lo distribuyan con arreglo á derecho. Este pago se entenderá sin perjuicio de la accion que pueda corresponder al deudor ó al tercero perjudicado, si lo hubiere, la cual podrá ejercitarse en el juicio correspondiente.»

LEY HIPOTECARIA,

de 8 de Febrero de 1861, reformada por la de 21 de Diciembre de 1869.

«Art. 72. Las anotaciones preventivas..... que deban su orígen á providencia de embargo ó secuestro, espresarán la causa que haya dado lugar á ellos y el importe de la obligacion que los hubiere originado.

Art. 73. Todo mandamiento judicial, disponiendo hacer una anotacion preventiva, espresará las circunstancias que deba esta contener, segun lo prevenido en el artículo anterior, si resultasen de los títulos y documentos que se hayan tenido á la vista para dictar la providencia de anotacion.

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de una persona, como en los casos de incapacidad y otros análogos, el registrador anotará todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre que el juez ó el tribunal lo ordene y se haga préviamente su inscripcion á favor de la persona gravada por dicha anotacion.

Art. 133. Al vencimiento del plazo para el pago de la deuda, el acreedor podrá pedir que se despache mandamiento de ejecucion contra todos los bienes hipotecados, estén ó no en poder de uno ó varios terceros poseedores..... No se suspenderá en ningun caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor, ó del tercer poseedor, ni por la declaracion de quiebra, ni por el concurso de acreedores de cualquiera de ellos.»

REGLAMENTO GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA LEY HIPOTECARIA,

aprobado en 21 de Junio de 1861, y reformado en 29 de Octubre de 1870.

«Art. 33. Cuando en alguna testamentaría ó concurso se adjudiquen bienes inmuebles á uno de los partícipes ó acreedores, con la obligacion de emplear su importe en pagar deudas ó cargas de la misma herencia ó concurso, se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario, haciéndose mencion literal de aquella obligacion.

Art. 43. La anotacion preventiva de las ejecutorias y de las providencias embargando, interviniendo, poniendo en secuestro ó prohibiendo enajenar bienes determinados, no podrá escusarse ni suspenderse por oposicion de la parte contraria.

Art. 45. Toda anotacion preventiva que no pueda hacerse sino por providencia judicial, se verificará en virtud de la presentacion en el registro de mandamiento del juez ó tribunal, en el que se insertará literalmente el particular de la providencia en que se haya dictado y su fecha.

El mandamiento será siempre espedido por el juez ó tribunal en cuyo término jurisdiccional radique el registro donde haya de tomarse la anotacion preventiva, al que exhortarán los demás jueces ó tribunales para que libre los mandamientos, cuando el registro no esté situado en sus respectivas demarcaciones.»

(1) Este decreto se publicó en la *Gaceta* del 6 de Febrero, con la fecha del 5 de Enero de 1869; pero en la *Coleccion legislativa* aparece con la del 5 de Febrero de dicho año, por la que se cita tambien en otras disposiciones oficiales.

LEY PROVIS. SOBRE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL, de 15 de Setiembre de 1870.

«Art. 309. No obstante las reglas establecidas en el artículo precedente (*son las generales de competencia en lo civil*), se observarán en los negocios y causas civiles que á continuacion se espresan, las siguientes:....

18. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, será fuero competente el del domicilio del mismo.

19. En los concursos ó quiebras promovidos por los acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo en las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste ó el mayor número de acreedores lo reclamaren. En otro caso, lo será aquel en que ántes se decretare el concurso ó la quiebra.

20. En la acumulacion de autos correspondientes á diferentes juzgados ó tribunales, cuando proceda segun las leyes, será competente el que conociere de los mas antiguos.

Esceptúanse los autos de testamentaría, abintestato, concurso de acreedores y quiebras, en los cuales la acumulacion se hará siempre á ellos.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren en diferentes instancias, y en los conclusos para sentencia, los cuales no serán acumulados.»

LEYES DE INDIAS.

REAL CÉDULA DE 15 DE ABRIL DE 1771.

«Por lo respectivo á los *concursos* y demas juicios que se llaman universales, es mi real voluntad, que siempre que un deudor comun estraño de la jurisdiccion militar forme concurso, deberán los acreedores, aun cuando sean milicianos, seguir su recurso ante el juez ordinario ó tribunal donde penda el concurso, para usar de su derecho, aunque sea mera ocurrencia de acreedores, debiendo seguirse para la sustanciacion de los referidos concursos el nuevo método establecido en el reglamento, respecto á que éste no altera en cosa alguna lo dispuesto por derecho en cuanto á los juicios civiles, de cuya naturaleza son los concursos ú ocurrencias.»

REAL CÉDULA DE 30 ENERO DE 1855.

«Art. 105. Los juzgados de Hacienda continuarán conociendo de los concursos y negocios en que sea parte el Estado; pero una vez satisfecho el crédito de éste, cesará dicho conocimiento y se trasladará á la jurisdiccion ordinaria ó á la que sea competente.»

REAL INSTRUCCION DE 9 DE DICIEMBRE DE 1865.

Entre las disposiciones que contiene, dictadas para la mas exacta inteligencia de la ley de Enjuiciamiento civil en su aplicacion á los tribunales de las islas de Cuba y de Puerto-Rico, donde debia empezar á regir el dia 1.° de Julio de 1866, con relacion á los juicios de concurso se encuentran las siguientes:

«Art. 14 Se entenderá suprimido el artículo 582 de la ley de Enjuiciamiento, y ocupará su lugar el párrafo segundo del 581.

Art. 17. Siempre que las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento se refieren al territorio de la Península, se entenderá que hablan del de cada una de las islas de Cuba y Puerto-Rico y sus agregadas respectivas.»

SECCION II.

Legislacion estranjera.

La necesidad de dictar reglas para hacer efectivos los derechos de los acreedores contra el deudor comun, ha sido reconocida por todas las legislaciones. El pago de las deudas se ha considerado en todos tiempos como una obligacion sagrada, y la ley ha sido y es inflexible con los que faltan á esos compromisos, tratándolos con más ó ménos dureza, pero siempre con severidad, segun los principios constitutivos de la sociedad y las tendencias de los pueblos respectivos. La esclavitud, y á veces tambien la muerte, en los tiempos antiguos, y en los modernos la prision, han sido los medios de apremio escogitados contra los deudores insolventes.

No corresponde tratar aquí de las obligaciones de los deudores, ni de los medios ordinarios y estraordinarios que puede emplear el acreedor particularmente y fuera de los casos de concurrencia. Reservando estas materias para sus artículos respectivos (véase **DEUDOR**, **JUICIO EJECUTIVO** y **PRISION POR DEUDAS**), nos limitaremos á indicar los procedimientos que las legislaciones estranjeras han establecido para los concursos de acreedores.

Derecho romano. Las leyes de las Doce Tablas trataron á los deudores con una crueldad bárbara y repugnante. Además de

permitir al acreedor, por la accion *manus injectio*, apoderarse de la persona del deudor confeso ó condenado en juicio, si no pagaba dentro de treinta dias, reduciéndolo á incómoda prision; sacarlo tres veces al mercado público durante otro plazo de sesenta dias, por si algun ciudadano se compadecia de él y pagaba, y venderlo por último como esclavo; para el caso concreto de que tratamos dispusieron lo siguiente: «Pero si los acreedores fuesen muchos, pasado este término (el indicado de sesenta dias), hagan trozos su cuerpo (el del deudor): si cortasen más ó ménos de lo que á cada uno correspondiere, sean inculpables. Si quisieren, véndanlo á los estranjeros del otro lado del Tiber.» (1)

Tan inexorable y tremendo rigor era insostenible, y cayó en desuso aun antes que el cristianismo, con su sublime y humanitaria doctrina, suavizara las costumbres. Aunque se conservó la antigua *manus injectio*, quedó limitada á un derecho de prision y servidumbre contra el deudor, para obligarle á pagar; y todavía el derecho pretoriano mitigó estos efectos, introduciendo la *missio in possessionem* de los acreedores sobre la universalidad de los bienes del deudor. Por este medio, las cosas del deudor, ó sean sus derechos y acciones, ocuparon el lugar de su persona, aplicándose á la personalidad jurídica lo que por la accion de la ley era aplicable á la personalidad física. Transcurridos los primitivos treinta dias, el pretor ordenaba que el deudor fuese llevado, *duci jubere*, y además que la universalidad de sus bienes fuese poseida por sus acreedores (*missio in possessionem*), y que se anunciara públicamente por edictos la venta futura (*proscriptio* y *emptio bonorum*). Esta série de procedimientos estaban indicados en la ley *Rubria*, que dijo: «*Prætor..... eosque duci, bona eorum possideri, proscribique, venireque jubeto.*» En esta subasta se empleaba el plazo de sesenta dias, y durante ellos se nombraba un síndico (*magister*), y se publicaban las condiciones de la venta, la cual se realizaba, como se ha dicho, de la universalidad de los bienes, que se adjudicaba al que ofrecia mayor dividendo á los acreedores. Despojado así el deudor de su personalidad jurídica, sufria una *capitis-diminutio*, que era infamante; pero quedaba libre de sus antiguas deudas; no podia ser demandado por el resto, y comenzaba desde entonces para él una nueva personalidad.

Este sistema, que constituia una sucesion universal en los bienes y derechos del deudor, y con ella la pérdida de su estado civil y la infamia, fué modificándose sucesivamente, permitiéndose á los acreedores proceder á la venta individual de cada uno de aquellos bienes, nombrando un curador especial que los administraba y enajenaba, pagando á los acreedores con el precio de la venta (1). Este procedimiento, llamado *distractio bonorum*, introducido primero como privilegio á favor de las personas distinguidas, y convertido despues en derecho comun, producia el natural efecto de que el deudor quedara responsable de las deudas antiguas, en todo aquello á que no habian alcanzado sus bienes, no permitiendo reducirle á prision hasta que constara que se negaba al pago.

De este modo fué suavizándose la dureza del derecho escrito contra los deudores; y pareciendo todavía inhumano que, el que de buena fé y por desgracias inevitables habia llegado al estado de insolvencia, sufriera las consecuencias del apremio corporal, ó la infamia inseperable de la *emptio bonorum*, se concedió últimamente por una ley *Julia*, atribuida generalmente á Julio César, y á Augusto por algunos, el beneficio de la cesion de bienes (*bonorum cessio*). Por este medio, el deudor que de buena fé hacia cesion ó abandono de todos sus bienes en manos de la justicia á favor de sus acreedores, se libraba de la prision y de la nota de infame, y conservaba su estado civil, por cuyas circunstancias se consideró como un *beneficio* legal. Pero, por lo mismo que conservaba su perso-

(1) *Tabla tercera, ley* 4.ª..... «At si pluribus erunt rei, tertiis nundinis partes secanto: si plus minusve secuerunt, ne fraude esto: si vollent. uls (trans) Teberim peregrinos venundanto.»

(1) Leyes 5.ª, tít. 10, lib. 27; y 4.ª, tít. 8, libro 42 del *Digesto*.

nalidad jurídica, no se libraba de toda responsabilidad, y si adquiria nuevos bienes, estaba obligado á pagar con ellos á los acreedores, que no hubiesen cobrado por completo (1). Le quedaba, sin embargo, á salvo el beneficio de no poder ser condenado sino en cuanto podia pagar buenamente, conservando lo necesario para su subsistencia (2). Hecha la cesion, se constituian en administracion judicial los bienes del deudor, y se procedia á su venta para pagar á los acreedores segun la preferencia de su respectivo derecho (3).

Las legislaciones que, como la nuestra, se inspiraron en el derecho romano, siguieron los mismos principios antes indicados, admitiendo el apremio corporal y, para evitarlo, el beneficio de la cesion de bienes; procediéndose en uno y otro caso á la venta de todos los del deudor, para distribuir su producto entre los acreedores segun el órden de preferencia ó la graduacion de sus créditos. Estos procedimientos, por regla general, están subordinados á los acuerdos de los acreedores interesados, con intervencion del deudor. En algunas naciones se ha suprimido, como lo ha hecho nuestra ley de Enjuiciamiento civil, el procedimiento especial para la cesion de bienes, confundiéndola con el concurso voluntario, y no concediendo por ella ventaja alguna al deudor, el cual queda sujeto, en cuanto á responsabilidad personal, á la calificacion que se haga de su conducta, ó de las causas que le hayan conducido al estado de insolvencia. Nos limitaremos á hacer una ligera reseña de la legislacion moderna de algunas naciones, para que pueda servir de estudio comparado: el darle mayor estension seria de poca ó ninguna utilidad, para el objeto de esta obra.

Francia. El *Código civil* francés, despues de tratar en los títulos 16, 17 y 18, del apremio corporal en materia civil, de las prendas y de los privilegios é hipotecas, dedica el tít. 18 á la espropiacion forzosa en favor de los acreedores, y al órden y distribucion entre estos del precio de los bienes del deudor. Dicta para todo ello reglas, que no son de este lugar, y por último en el art. 2218 dispone, «que el órden y la distribucion del precio de los inmuebles, y la manera de proceder en todo ello, se arreglará á las leyes sobre el procedimiento.»

Permite tambien la *cesion de bienes*, colocándola entre los modos de estinguir las obligaciones. Esta cesion puede ser voluntaria ó judicial. La primera es la que aceptan voluntariamente los acreedores, y no produce otros efectos que los que resultan del mismo convenio celebrado con el deudor. La judicial es un beneficio que la ley concede al deudor desgraciado, pero de buena fé, á quien se permite, para conservar la libertad de su persona, hacer judicialmente abandono de todos sus bienes á sus acreedores, no obstante cualquiera estipulacion contraria. La cesion judicial no confiere la propiedad á los acreedores: les dá solamente un derecho para hacer que se vendan los bienes en beneficio suyo, y percibir lo que produzcan hasta que se verifique la venta. Los acreedores no pueden rehusar la cesion judicial sino en los casos esceptuados por la ley. La cesion liberta al deudor del apremio personal. En lo demás no liberta al deudor sino en cuanto valen los bienes dimitidos; y en el caso que estos no hubiesen sido suficientes, si llegase á tener otros, está obligado á dimitirlos tambien hasta completar el pago. (Art. 1263 á 1270 de dicho Código.)

El *Código de procedimiento civil* francés, en el lib. 5.° de la 1.ª parte, trata de los embargos y venta de bienes, tanto muebles como inmuebles, de la distribucion de su valor entre los acreedores, y del apremio personal o

(1) Ley 1.ª, tít. 71, lib. 7 del Código: «Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor receperit, non sunt liberati. In eo enim tantummodo hoc beneficium eis prodest, ne judicati detrahantur in carcerem.» Y la ley 11, tít. 12, lib. 2 del mismo Cod. dice: «Debitores, qui bonis cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, infames non fiunt.»

(2) Ley 4.ª, tít. 3, lib. 42, Dig. «Is qui bonis cessit, si quid postea adquisierit, *in quantum facere potest* convenitur.» Y para justificar esta limitacion del derecho de los acreedores, en el párrafo final, tit 6, lib. 4, *Inst.*, se dice: «inhumanum enim erat, spoliatum fortunis suis in solidum damnari.»

(3) Pueden consultarse las leyes del tít. 3, lib. 42, Dig., *De cessione bonorum*; y las del título 71, lib. 7, Cód., *Qui bonis cedere possunt*. Véase tambien el artículo Cesion de bienes.

prision del deudor. En estos procedimientos están comprendidos los del concurso de acreedores.

El tít. 11 de dicho libro trata *de la distribucion por contribucion*, ó á prorata, entre los acreedores comunes del dinero embargado ó precio de los bienes muebles y de los inmuebles no hipotecados, cuando no basta para pagar á todos. Esta distribucion debe hacerse por convenio entre los acreedores y el deudor: á falta de avenencia, se nombra un juez comisario, ante el cual presentan los acreedores los títulos de sus créditos, se ventilan las oposiciones ó reclamaciones que se deducen, y se decide en fin sobre la distribucion en proceso verbal por el mismo juez comisario, cuando no hay contradiccion; y si la hay, los puntos sobre que versa la dificultad se someten á la resolucion del tribunal, el cual falla, oyendo sumariamente á los interesados, y con vista del informe del juez comisario y de las conclusiones del ministerio público. Esta sentencia es apelable. Desde el dia en que causa ejecutoria, ó en que se cierra el proceso verbal, cesan los intereses de los créditos admitidos á participar en la distribucion. (Arts. 656 á 672 de dicho Cód. de proc. civil.)

El tít. 14 lleva por epígrafe *Del órden*: comprende los arts. 749 al 779, y en ellos se reglamenta el procedimiento para determinar el órden de preferencia y distribucion entre los acreedores del precio de los inmuebles del deudor. En los tribunales de primera instancia, donde las necesidades del servicio lo exijen, se nombra uno ó mas jueces especialmente encargados de estos negocios. Este juez comisario convoca á los acreedores á junta para que se convengan amistosamente sobre la distribucion del precio. El que no comparece debe pagar una multa de 25 francos. El resultado de la junta se consigna en un proceso verbal. Si hay avenencia, el juez comisario ordena el pago por el órden convenido; y si no la hay, se consigna así en el proceso verbal, se declara abierto *el órden*, y se notifica á los acreedores para que produzcan sus títulos, con la advertencia de que se tendrá por decaido de su derecho al que no lo verifique dentro de 40 dias.

Trascurrido este plazo, el juez comisario forma el estado de colocacion de los acreedores que han presentado sus títulos; se da conocimiento á estos y al deudor; si no lo impugnan, se lleva á efecto por aquel; y si hay contradiccion, se remiten los autos al tribunal, para que decida, oyendo sumariamente á los interesados y al deudor. Si la suma controvertida escede de 1,500 francos, se dan los recursos de apelacion y de casacion. Luego que recae ejecutoria, el juez comisario decreta definitivamente el órden de los acreedores, cesando desde entonces los intereses, y se dictan las disposiciones necesarias para el pago y para la cancelacion de las hipotecas, ya se haya hecho la venta por espropiacion forzosa, ya de otro modo. No pueden provocarse estos procedimientos sino en el caso de que haya cuatro acreedores inscritos.

En el tít. 12, lib. 1.° de la 2.ª parte, ordena el mismo código de procedimiento civil el que ha de emplearse para hacer judicialmente la *cesion de bienes* á favor de los acreedores. El deudor que se halle en el caso de utilizar este beneficio, debe entregar en la escribanía del tribunal, con la demanda, el balance, sus libros, y los títulos de sus créditos activos. Esta demanda se presenta por el deudor ante el juez de su domicilio, y se comunica al ministerio público. Ha de ratificarse en ella el deudor personalmente, prévia citacion de los acreedores, consignándolo en acta ó proceso verbal, y para ello debe ser puesto en libertad, si se hallase detenido, lo cual acuerda el juez al admitirlo al beneficio de cesion. (Arts. 898 á 902 de dicho código de procedimiento civil.)

El nombre, apellidos, profesion y domicilio del deudor, que hace cesion de bienes, se coloca al público en el local en que celebra sus sesiones el tribunal de comercio, y en su defecto el de primera instancia que conoce del negocio (art. 903 de id.). Antiguamente, segun Pothier y otros autores, se le imponia, como condicion para librarse del apremio corporal, la obligacion de llevar en público un *gorro verde*, costeado por los acreedores, bajo la pena de decaer del beneficio de cesion, y de poder ser reducido á prision, si no lo lle-

vase. Este distintivo, especie de sambenito, cayó en desuso, y no se halla autorizado por el código vigente.

El juez, que otorga el beneficio de cesion, confiere poder á los acreedores para vender los bienes muebles é inmuebles del deudor, cuya venta se verifica en pública subasta, distribuyéndose el precio de unos y otros entre ellos por el órden de preferencia, y en la forma indicada anteriormente (art. 904 de idem.).

Italia. Tanto el código civil, como el de procedimiento civil, que en la actualidad rigen en el reino de Italia, fueron aprobados en 25 de Junio de 1865, tomando por base el código de Napoleon y concordándolo con éste, con el de las Dos Sicilias, sardo, austriaco, de Parma, Toscana, pontificio y demás Estados que han constituido aquel reino, á fin de poner en armonía los intereses de los mismos. Las disposiciones de uno y otro sobre la materia de que tratamos, son análogas á las de los códigos franceses.

El procedimiento á que han de ajustarse los juicios de espropiacion y graduacion, está marcado en el tít. 3.° del lib. 2.° del código de procedimiento civil, y arts. 659 y siguientes. Al deudor se le conceden 30 dias para pagar la deuda, y pasados, el acreedor puede pedir la venta del inmueble ante el juez de la jurisdiccion donde éste se halle situado. Nombrados peritos, y valorados los bienes, se publican edictos, y se procede á la venta en pública subasta: el precio ofrecido se anuncia oficialmente, porque es susceptible de mejora dentro de 15 dias; pero si no se mejora, se adjudican los bienes al comprador. Dentro de los 30 dias de publicado el edicto anunciando la venta de los bienes, los acreedores que se crean con derecho á los mismos, deben presentar los títulos justificativos de sus créditos, que pueden ser examinados por los demás interesados. El juez delegado, dentro de 40 dias forma los estados de graduacion, y los acreedores pueden enterarse y presentar nuevos documentos, re-
lviéndose todas las cuestiones por actas
rbales. El precio de los bienes muebles se
tribuye segun los estados de graduacion,
luego que estos han sido omologados ó consentidos.

Portugal. El código civil que rige en este reino, sancionado en 1.° de Julio de 1867, establece en la seccion 8.ª del capítulo 10, tít. 1.°, lib. 2.° de la parte 2.ª, artículos 1005 y siguientes, las reglas que han de guardarse en el concurso de créditos hipotecarios y moviliarios. Nada dispone especialmente sobre el beneficio de cesion de bienes, quedando por tanto sujetos los deudores á unas mismas condiciones para el juicio de concurso, como lo ha establecido tambien nuestra ley de Enjuiciamiento civil, consecuencia necesaria de haberse suprimido la prision por deudas civiles. El art. 1024 ordena, que la espropiacion, de cualquier modo que se verifique, hace exigibles, desde la fecha de ella, todas las obligaciones á que esté afecto el predio espropiado.

La *Novísima reforma judicial*, decretada en 21 de Mayo de 1841, comprende el código de procedimiento civil: en él, despues del juicio ejecutivo y tercerías, en el cap. 11 del tít. 16, se trata de las *preferencias*, y en los arts. 641 al 653 se establece, que para esta clase de juicios deben ser citados todos los acreedores, los cuales deducirán su derecho dentro de diez dias improrogables. De esta solicitud se confiere vista á los demás interesados, y el juez gradúa los créditos reclamados segun el derecho que les confieren sus títulos y las leyes existentes. Esta sentencia es apelable en ambos efectos.

Prusia. Esta nacion, hoy imperio de Alemania, tiene una ley especial para el juicio de concurso, dada en 8 de Mayo de 1855, y modificada por otra de 12 de Mayo de 1869. En ella se comprenden los procedimientos sobre las quiebras, y los que se refieren á los concursos de los que no son comerciantes. Daremos una ligera idea de estos últimos, atendido el límite natural de este artículo.

El juicio de concurso se rige por el mismo procedimiento de la quiebra, con algunas modificaciones (art. 333). Estas consisten en que la autoridad judicial, en casos urgentes, como el de ocultacion ó fuga del deudor,

puede, á instancia de un acreedor, adoptar las medidas necesarias para la seguridad de los bienes del deudor (art. 334). El administrador provisional de la masa debe formar el activo y pasivo del deudor, por los libros y papeles de éste, dando su opinion en caso de haberse solicitado quita; pero no está obligado, sino en el caso de resultar alguna accion penada por la ley, á consignar las causas ó motivos del concurso, ni á emitir dictámen sobre su naturaleza (arts. 335 y 336). La proposicion de quita no entorpece el nombramiento de administrador ni la liquidacion de la masa; pero en este caso, si el deudor fallece y su herencia se acepta á beneficio de inventario, el heredero puede ser administrador de los bienes, con los mismos derechos y obligaciones que tiene todo administrador de la masa del concurso (art. 337 y 338). No se abre dicho juicio, si no consta al juez que el deudor tiene bienes bastantes para responder de los gastos del concurso (art. 339). Con estas modificaciones, el juicio de concurso se rige por el procedimiento de la quiebra.

Este tiene lugar, segun el art. 113, por la suspension de los pagos manifestada por el deudor, por el cierre del establecimiento de este, ó cuando resulta que no tiene bienes bastantes para pagar sus deudas. Hay por lo mismo un concurso voluntario, que comienza por la manifestacion del deudor, y hay otro necesario que impone la ley, cuando el deudor no tiene bienes bastantes para cubrir sus deudas, á pesar de lo cual la legislacion alemana establece un mismo procedimiento para ambos casos. La manifestacion en concurso debe hacerse dentro de los tres dias siguientes á la suspension de los pagos, presentando los libros y un balance con activo y pasivo, domicilio de los acreedores, proporcion de los bienes con las deudas, y certificacion firmada de su exactitud. El juez debe abrir el concurso inmediatamente que tenga conocimiento de la suspension de pagos por manifestacion del deudor, ó le conste de una manera positiva por la peticion de un acreedor con bastantes pruebas, siempre que de no abrirlo pueda resultar perjuicio para los acreedores (arts. 117 y 118).

Para pronunciar la declaracion de concurso se necesita una causa fundada, y el juez está en libertad de procurarse además, por el llamamiento del deudor ó de otra manera, los informes que estime necesarios (artículo 119). De la negativa del juez puede apelarse dentro de diez dias; pero si no se reclama, el concurso se abre en la misma hora en que se declara, lo cual debe indicarse en la providencia, y si no se indica, se entienden las doce del dia en que se tomó el acuerdo (arts. 120 y 121). Tambien se ha de fijar el dia de la suspension de los pagos, sin que en ningun caso pueda fijarse seis meses antes de la declaracion de concurso (art. 122). Uno y otra han de publicarse inmediatamente por edictos, y el deudor puede oponerse á la declaracion de concurso, solo en apelacion ó casacion, á los 10 dias de su fecha, cuya declaracion deberá sostenerse por el administrador de la masa y por el acreedor que la solicitó (art. 124).

La administracion del concurso se confiere á un solo administrador. Comparecidos los acreedores se procede á su reconocimiento y graduacion por el juez, prévio dictámen del administrador: esta resolucion puede ser impugnada por aquellos á quienes perjudique. Admítese la libertad de convenirse el deudor y los acreedores, y de que el primero pueda pedir quita ó perdon de parte de sus deudas, teniendo lugar respecto del mismo el apremio personal (arts. 362 á 376). El deudor debe además ser castigado por sus actos fraudulentos.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Reseña histórica.
Sec. II. Diferentes clases de concurso de acreedores, y efectos del mismo.
§. 1.° *Diferentes clases de concursos.*
§. 2.° *Efectos de la declaracion de concurso.*
Sec. III. Del concurso voluntario.
§. 1.° *Juez competente.*

§. 2.° *Personas que pueden presentarse en concurso voluntario.*
§. 3.° *Requisitos para la declaracion del concurso voluntario.*
§. 4.° *Procedimientos.*
SEC. IV. DE LA QUITA Y ESPERA
§. 1.° *Procedimiento especial de la quita y espera: convocacion de la junta de acreedores.*
§. 2.° *Celebracion de la junta de acreedores, y efectos de sus acuerdos.*
§. 3.° *Oposicion al acuerdo otorgando la quita ó espera.*
SEC. V. DEL CONCURSO NECESARIO.
§. 1.° *Requisitos para la formacion de este juicio.*
§. 2.° *Juez competente.*
§. 3.° *Pleitos acumulables al de concurso.*
§. 4.° *Oposicion del concursado.*
§. 5.° *Embargo y depósito de los bienes del deudor, y ocupacion de sus libros, papeles y correspondencia.*
§. 6.° *Atribuciones y deberes del depositario.*
§. 7.° *Formalizacion del concurso: convocacion de los acreedores: nombramiento, posesion, atribuciones y cesacion de los síndicos.*
§. 8.° Pieza 1.ª—*Administracion del concurso. Venta de los bienes: cuentas de los síndicos.*
§. 9.° Pieza 2.ª — *Reconocimiento y graduacion de créditos. Pago de los mismos.*
§. 10. *Acreedores morosos.*
§. 11. Pieza 3.ª—*Calificacion del concurso. Responsabilidad criminal del concursado, en su caso.*
§. 12. *Conclusion del juicio. Rehabilitacion del concursado.*
SEC. VI. DEL CONVENIO.
SEC. VII. ALIMENTOS DEL CONCURSADO.
SEC. VIII. DECLARACION EN CONCURSO DE TESTAMENTARÍAS Y AB-INTESTATOS.
SEC. IX. DEL CONCURSO DE ACREEDORES EN ULTRAMAR.

SECCION I.

RESEÑA HISTÓRICA.

Habiendo sido el derecho romano el fundamento y orígen de la antigua legislacion española, especialmente en materia de contratos, era natural que nuestras leyes adoptaran contra los deudores insolventes el rigor establecido por aquel, y que hemos espuesto anteriormente en la parte legislativa, al hacer la reseña de la *legislacion estranjera*: rigor, acomodado, por otra parte, á las costumbres y principios sociales de aquella época, en que no se reconocian otras garantías de pago que la prenda ó el apremio personal. Así vemos en nuestros primeros códigos, que la prision y la esclavitud era la suerte reservada, por regla general, á los que carecian de bienes para pagar á sus acreedores. V. **DEUDOR**: **PRISION POR DEUDAS.**

La ley 5.ª, tít. 6, lib. 5.° del Fuero Juzgo, despues de ordenar que, si algun hombre tiene muchas deudas, debe pagar primero al que primeramente le demande, dice: «E si vinieren muchos demandadores de so uno, deve facer paga á cada uno, segund quel deve; é si non, sea siervo de todos.» Y aun añade, que el juez debe averiguar cuál de los acreedores tiene mejor derecho, y hacer que se le pague, y de lo que reste de los bienes del deudor, que se pague á los otros; «é si non oviere onde pague á los otros, deve seer siervo daquellos por la debda.» A la propia condicion humillante de esclavos condenaron tambien las leyes del Fuero Real á los deudores insolventes, para que pagasen sus deudas con el producto de su trabajo, ó sirviéndose de ellos los acreedores, despues que hubiesen sufrido sin resultado el apremio corporal de la prision (1).

Las leyes de Partida, fiel reflejo en este punto, como en otros muchos, del derecho

(1) Leyes 2, tít. 8.°, y 5.°, 12 y 17, tít. 20, libro 3.° del Fuero Real: 4.ª y 5.ª, tít. 3.°, lib. 5.° de las Ordenanzas Reales.

romano en su última época, si bien suprimieron la esclavitud de los deudores, conservaron la prision por deudas, y aun, para librarse de ella, establecieron el beneficio de la cesion de bienes, segun hemos espuesto en su artículo correspondiente. (V. CESION DE BIENES.) Y el mismo sistema siguieron las leyes recopiladas, como puede verse consultando las que se citan en dicho artículo, y las que se insertan en la *parte legislativa* del presente; cuyo sistema ha regido hasta época reciente, en que, establecidos y organizados los registros de hipotecas, denominados hoy de la propiedad, y abolida la prision por deudas civiles, se han adoptado otras garantías mas eficaces y positivas para los acreedores, y menos vejatorias y humillantes para los deudores, haciéndose en su virtud innecesarios los beneficios concedidos por nuestras leyes antiguas á la cesion de bienes, y confundiéndola en sus efectos con el concurso voluntario, como lo ha hecho la ley de Enjuiciamiento civil de 1855.

Tambien era permitido á los deudores, antes de desamparar sus bienes, solicitar de los acreedores *espera* ó aplazamiento para el pago, ó *quita* ó condonacion de parte de las deudas; ó ambas cosas á la vez; y debia llevarse á efecto lo que acordara la mayoría, formada por los acreedores que representasen mayor suma en las deudas; pero quedando siempre á salvo los derechos de los hipotecarios y prendarios (1). Estos beneficios han sido respetados por la ley de Enjuiciamiento civil, como espondremos mas adelante.

Y todavía en nuestro antiguo sistema de gobierno quedaba otro recurso á los deudores, cual era el de acudir al Rey, pidiendo espera ó moratoria para pagar, cuya gracia solia concederse á consulta del Consejo, oyendo á los acreedores y dando fianzas el deudor para asegurar el pago (2). Pero esta materia debe reservarse para su artículo correspondiente, limitándonos ahora á indicar que, por Real decreto de 21 de Marzo de 1834, se mandó que no se diese curso á ninguna solicitud sobre concesion de moratorias para suspender ó retardar el pago de deudas.

Tal es, en resúmen, la historia de nuestra legislacion, anterior á la ley de Enjuiciamiento civil, sobre la materia de que tratamos. Es de notar que todas las disposiciones se dirigen á determinar los derechos de los acreedores contra el deudor comun, para el caso de concurso; pero apenas se encuentra en ellas una regla concreta de procedimiento. En la ley 1.ª, tít. 15 de la Partida 5.ª se ordenó la forma, en que debia hacerse el desamparo de bienes, disponiendo que todo hombre libre, no teniendo de qué pagar lo que debe, pudiera desamparar sus bienes en favor de los acreedores, por sí ó por medio de procurador, debiendo hacerlo ante el juez, confesando las deudas y espresando la razon de no poder pagarlas; y en su vista el juez debia tomar todos los bienes del deudor, sin dejarle otra cosa que las ropas de su uso, venderlos en almoneda, y entregar el precio á los acreedores. Habia esta regla para incoar el procedimiento; mas nada se dispuso respecto á los trámites ulteriores del juicio de concurso, cuyo procedimiento era por consiguiente arbitrario.

De aquí resultó la diversidad de prácticas y de jurisprudencia, con todos sus abusos é inconvenientes, siendo el mas capital la indeterminada duracion de estos juicios, que se hacian interminables. Es notable lo que sobre este particular se consignó en la *Esposicion de motivos de la ley de Enjuiciamiento civil*, que publicó D. Pedro Gomez de la Serna, como individuo de la Comision de Códigos. En la pág. 112 dice:

«No eran menos proverbiales los abusos que se cometian en los concursos de acreedores, que los de los juicios de ab-intestato y testamentaría. En algunos juzgados, especialmente de poblaciones en que era notable el movimiento mercantil, se iban introduciendo, por práctica, algunas de las prescripciones que el Código de comercio y la ley de Enjuiciamiento que lo completa, habian previsoramente establecido para las quiebras. De este

(1) Leyes 5.ª y 6.ª, tít. 15, Part. 5.ª
(2) Ley 33, tít. 18, Part. 3.ª, y leyes del título 33, lib. 11 de la Nov. Rec.

modo, en vista de la falta de reglas en el derecho comun escrito, y de los abusos que la ignorancia, el empirismo, la avaricia curial y la mala fé habian introducido, comenzaba á levantarse una jurisprudencia racional, que indicaba cuál era la opinion respecto á la reforma, y señalaba al legislador el camino que debia seguir. La Comision encargada del proyecto de la ley de Enjuiciamiento civil no podia vacilar en este punto: buscó en otra ley análoga lo que la esperiencia habia acreditado como bueno; aceptó del derecho escrito y de la jurisprudencia antigua todo lo que podia ser aprovechado para la obra nueva, y reformando siempre, y corrigiendo y atendiendo á las lecciones de lo pasado, procuró que al caos sucediera la luz; que pasara á la historia el adagio que consideraba como eternos los concursos; que se salvaran los derechos de los acreedores, sin negar á los deudores la proteccion que de justicia se les debe; que se estirpara el semillero de abusos que la jurisprudencia hacia fáciles, y que se introdujera más moralidad en esta clase de juicios.»

Bajo estas bases, y con el fin de corregir los abusos indicados, en la ley de Enjuiciamiento civil, sancionada en 5 de Octubre de 1855, se dió forma á los juicios de concurso, determinando circunstanciadamente los procedimientos á que han de subordinarse. A ellos se consagró el título 11 de la primera parte, cuyas disposiciones, que constituyen la legislacion vigente, serán examinadas en las secciones sucesivas.

SECCION II.

DIFERENTES CLASES DE CONCURSO DE ACREEDORES Y EFECTOS DEL MISMO.

En la introduccion del presente artículo hemos dado la definicion del *concurso* y de sus diferentes especies. Conviene ampliar aquí las indicaciones hechas sobre este punto en dicho lugar, esponiendo á la vez los efectos que produce en general la declaracion de concurso, para determinar en las secciones siguientes el procedimiento á que debe subordinarse cada una de las clases de concursos que reconoce la ley, sus diferencias y efectos especiales.

§. 1.° *Diferentes clases de concursos.*

La ley de Enjuiciamiento civil, de acuerdo con la antigua jurisprudencia, ha reconocido dos clases de concursos de acreadores, á los que ha dedicado las secciones 1.ª y 2.ª del título XI de su primera parte: el *voluntario*, que es el que promueve el mismo deudor; y el *necesario*, que es el que se forma á instancia de los acreedores. Nada dice la ley de la *cesion de bienes*, y es porque esta forma jurídica está refundida hoy en el concurso voluntario. El deudor, que promueve este juicio, no hace otra cosa que ceder sus bienes á sus acreedores para que con ellos se hagan pago de sus legítimos créditos. El principal beneficio de la cesion, segun el derecho antiguo, consistia en librarse el deudor de la prision preventiva; y como esta no puede hoy tener lugar en ningun caso, no habia para qué hacer distincion entre uno y otro procedimiento. Los demás efectos de la cesion, que hemos esplicado en su artículo respectivo (véase CESION DE BIENES), se consiguen por medio del concurso voluntario: basta se exijen para éste, por el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento, los mismos requisitos sustancialmente que las leyes y la jurisprudencia antiguas exigian para aquella: de consiguiente, la cesion de bienes ha quedado refundida en el concurso voluntario.

No se entienda por esto, que ha quedado derogado lo que acerca de la cesion de bienes tenian establecido nuestras leyes. La nueva ley de Enjuiciamiento civil no ha hecho otra cosa que regularizar y ordenar el procedimiento; pero sin alterar el derecho, porque esto no era de su incumbencia. Es verdad que, segun ella, el deudor que hace cesion de bienes, queda sujeto al resultado de la calificacion del concurso para exigirle la responsabilidad, en que pueda haber incurrido; responsabilidad, que, por regla general, no se examinaba en el procedimiento antiguo; mas esto es de rigorosa justicia, y un trámite que

tampoco estaba prohibido por las leyes antiguas. No era justo que por haberse anticipado el deudor, acaso de mala fé, á hacer cesion de bienes, se librara de la responsabilidad criminal en que pudiera haber incurrido. La proteccion y amparo que la ley ha creido conveniente dispensar al que ha venido al estado de insolvencia por consecuencia de desgracias é infortunios casuales, que no ha estado en su mano evitar, no puede alcanzar á los que han venido á ese estado por consecuencia de su mala conducta, y de fraudes y manejos reprobados, aunque se cubran con la forma benéfica de la cesion.

Por lo demás, las mismas personas que antes podian hacer cesion de bienes, pueden hoy presentarse en concurso voluntario, como indicaremos en la seccion siguiente, acomodándose al procedimiento que allí espondremos, que es lo que ha ordenado y regularizado la nueva ley. De consiguiente, para la cesion de bienes ha de emplearse en el dia el procedimiento establecido para el concurso voluntario, en el que, segun queda indicado, ha quedado refundida.

Otra especie de concurso voluntario es la *quita y espera*, ó cualquiera de las dos cosas, y en tal concepto trata de ellas la ley de Enjuiciamiento, en la misma seccion, que lleva por epígrafe, *Del concurso voluntario de acreedores*. Solo en un sentido lato puede dárseles esta denominacion. Siendo la *quita* la condonacion ó remision de parte de las deudas, á condicion de pagar el resto; y la *espera* una dilacion, plazo ó moratoria, que conceden los acreedores al deudor comun, para que pueda pagarles con más comodidad; más bien que un juicio de concurso, deben considerarse estos recursos como un beneficio que los acreedores conceden á su deudor, quizá condolidos de su desgracia; pero con el objeto de obtener el reintegro de sus créditos, hasta donde sea posible, y sin dispendios. Confirma dicha idea la circunstancia de que, si los acreedores no conceden la quita ó espera, no se sigue el juicio de concurso; sino que queda concluido, y en libertad los interesados para hacer uso de los derechos que puedan corresponderles, como se previene en el art. 512 de la misma ley. Esto no obstante, como esos beneficios no pueden concederse sin la *concurrencia* y voluntad de los acreedores, en este concepto la nueva ley, lo propio que la antigua jurisprudencia, los ha considerado como una especie de concurso voluntario, aunque con su procedimiento y efectos especiales, cuando se solicitan antes del juicio de concurso; pues, si se promueven, como pueden promoverse la quita ó espera, durante el concurso voluntario ó el necesario, en tal caso son parte de este juicio, y están subordinadas á las condiciones de cualquier otro convenio, que en él pueda proponerse.

Resulta, pues, que la ley reconoce dos clases de concursos: el *voluntario* y el *necesario*; y como una especie de aquel la *quita* y *espera*. De los tres trataremos con separacion en las secciones siguientes, espresando las personas sujetas á cada uno de dichos juicios, casos y forma en que han de promoverse, y sus procedimientos. Respecto de estos, es de advertir que, segun el art. 519 de la citada ley de Enjuiciamiento, cuando se pida simplemente la formacion de concurso voluntario; y no la quita ó espera, ha de acomodarse la sustanciacion á las reglas establecidas para el concurso necesario: de suerte que estos dos concursos sólo se diferencian en la forma de promoverlos, pues el uno se promueve por el deudor, y el otro á instancia de los acreedores, como ya se ha dicho. Una vez declarado el deudor en concurso, y adoptadas las medidas especiales, que uno y otro caso requieren para la seguridad de los bienes, en ambos juicios se convoca á junta de acreedores para el nombramiento de síndicos, y desde este período en adelante se rijen por un mismo procedimiento. En sus secciones respectivas se espondrá lo que es especial, y lo que es comun de uno y otro juicio, como tambien lo relativo al *convenio*, *alimentos*, *responsabilidad criminal* y *rehabilitacion del concursado*, en su caso.

Concluiremos esta seccion, recordando que los procedimientos, que vamos á esponer, no son aplicables á los concursos de los comerciantes: estos tienen su juicio especial, llama-

do *de quiebra*, como ya se dijo en la introduccion del presente artículo.

Tambien debemos advertir que, en todos estos juicios, deben comparecer las partes por medio de procurador y con direccion de letrado (1), haciendo uso, las que no estén declaradas pobres, del papel sellado que corresponda á la cuantía del negocio. A este fin, en las piezas generales de autos se atenderá al valor de toda la masa de bienes del concurso, que préviamente señalará el deudor en el voluntario; y en el necesario, el acreedor ó acreedores que lo promuevan; y en las piezas particulares ó juicios incidentales se tomará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamacion que se ventile (2).

§. 2.° *Efectos de la declaracion de concurso.*

No vamos á esponer aquí los efectos de la declaracion del concurso, ya sea voluntario ó necesario, con relacion á los procedimientos ulteriores hasta la terminacion del juicio respectivo; sino los efectos legales que produce en general, respecto de las obligaciones y responsabilidad del deudor, que se constituye en esa situacion, y de los derechos de sus acreedores. Estos efectos son:

1.° Que el deudor, desde que es declarado en concurso, queda privado de la libre administracion de sus bienes, y no puede celebrar acto ni contrato relativo á los mismos, sin producir una evidente nulidad. Por ello es necesario y conveniente á la vez, que declarado el concurso, se tome razon de esta declaracion en los registros de la propiedad, donde radiquen los bienes del deudor, á fin de evitar la inscripcion de todo acto ó contrato no registrado hasta entonces.

2.° Que cuantas reclamaciones hayan de entablarse por responsabilidades que afecten á los bienes del concursado, han de deducirse contra la masa concursada y en el juicio universal del concurso, al que han de acumularse tambien los demás juicios, pendientes contra dicho caudal, conforme á lo prevenido en el caso 3.° del art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en la regla 20 del 309 de la ley provisional de organizacion del poder judicial, en la forma y términos y con las escepciones que espondremos en el párrafo 3.° de la seccion V. Este efecto tiene lugar, aunque el juicio sea de quita ó espera, segun declaracion hecha por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de competencia, de 12 de Marzo de 1859. En esta sentencia se consignó la doctrina de que, promovido ante el juez del domicilio concurso de acreedores, y legítimamente constituido el juicio, la ley no establece diferencia entre el voluntario y necesario, á los efectos de la acumulacion de procedimientos pendientes sobre responsabilidad, que afecte á los bienes concursados; y que, siendo un concurso voluntario el juicio de *espera*, atrae el conocimiento de los procedimientos ejecutivos pendientes en otro juzgado contra el mismo deudor.

3.° Estinguir los créditos, hasta la cantidad á que alcancen los bienes concursados, sin perjuicio de la responsabilidad de los fiadores; y que el deudor no pueda ser reconvenido mientras no mejore de condicion, si bien en este caso habrá de dejársele lo necesario para vivir con decencia, segun su clase y circunstancias, por considerarse subsistente el *beneficio de competencia*, establecido terminantemente por la ley 3.ª, tít. 15, Partida 5.ª

Y 4.° Que los acreedores adquieren el derecho de hacer vender los bienes concursados, y de que su producto y el de las rentas se invierta en el pago de sus créditos.

No nos estendemos mas sobre esta materia, por haberla tratado ámpliamente en el párrafo 3.° de la seccion II del artículo CESION DE BIENES (*pág.* 601 *del tomo* 8), donde podrá consultarse.

Estos son los principales efectos, que nuestros prácticos atribuyen á la cesion de bienes, ó sea al concurso voluntario; pero es de advertir, que no deben considerarse como esclusivos de este juicio, pues tambien produce hoy los mismos efectos el concurso necesario.

(1) Artículos 13 y 19 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 835 de la de 15 de Setiembre de 1870.

(2) Artículo 7.° de id., y 25 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre papel sellado.

Ya hemos indicado, que, suprimida la prision por deudas civiles, y en virtud además de las reformas hechas en estos procedimientos por la ley de Enjuiciamiento civil, no se diferencian dichos juicios, sino en el modo ó forma de incoarlos, y de consiguiente son iguales en sus efectos.

En cuanto á los concursos de quita y espera, sus efectos han de subordinarse al convenio que el deudor celebre con sus acreedores, salvo el de la acumulacion en la forma y casos esplicados anteriormente.

SECCION III.

DEL CONCURSO VOLUNTARIO.

El concurso de acreedores se llama *voluntario*, cuando lo promueve voluntariamente el mismo deudor, haciendo cesion ó abandono de todos sus bienes á favor de sus acreedores. Ya hemos dicho que la ley ha considerado, como una especie de este juicio, la *quita y espera*: pero, subordinadas estas á un procedimiento especial, cuando el deudor limita su pretension á obtener esos dos beneficios, ó cualquiera de ellos, debemos tratar de esta materia en seccion aparte, y lo haremos en la siguiente, tanto por la razon indicada de ser una especie del concurso voluntario, como por serles aplicable lo que espondremos en los tres primeros párrafos de esta seccion.

Nos limitaremos, por tanto, á tratar aquí del *concurso voluntario*, propiamente dicho, ó sea del juicio universal, que se promueve á instancia del deudor, para que, concurriendo á él todos sus acreedores, se les pague por el órden que corresponda, segun la preferencia de los créditos y hasta donde alcancen sus bienes, que abandona á favor de los mismos. Espondremos, pues, lo que las leyes y la jurisprudencia tienen establecido respecto al juez competente para conocer de este juicio y de sus incidencias, personas que pueden promoverlo, requisitos indispensables para obtener la declaracion de concurso, y procedimientos á que ha de subordinarse el juicio, indicando en ellos las medidas que deben adoptarse para la seguridad de los bienes.

§. 1.° *Juez competente.*

La ley 1.ª, tít. 15, Partida 5.ª, ya citada, exigia que la cesion de bienes se hiciese en juicio, ó á presencia del juez; y el art. 505 de la ley de Enjuiciamiento civil declaró que el juez del domicilio del que se presente en concurso voluntario, es el competente para conocer de este juicio. Fundándose en esta última disposicion, ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia, por sentencias, en competencias, de 1.° de Marzo y 13 de Noviembre de 1862, 25 de Febrero de 1863 y otras, que el juez del domicilio del concursado es el *único* competente para conocer del concurso voluntario de acreedores. Por domicilio legal debe entenderse el lugar, en que el que se presenta en concurso, tiene su residencia habitual, con casa abierta, ejerciendo allí su profesion, arte ú oficio, ú otra cualquier manera de vivir conocida, ó manteniéndose con el producto de sus bienes.

La ley provisional sobre organizacion del poder judicial, de 15 de Setiembre de 1870, ha hecho sobre este punto la misma declaracion. Segun la regla 18 de su art. 509, «en los concursos de acreedores, cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, será fuero competente el del domicilio del mismo.» Y en los arts. 310 y siguientes determina circunstanciadamente, y como regla general, cuál sea el domicilio legal de las mujeres casadas, el de los hijos constituidos en potestad, el de los menores é incapacitados, empleados, militares, etc., cuyas disposiciones se espondrán en su artículo respectivo. Véase **DOMICILIO**.

El mismo juez, que conozca del concurso, es el único competente para conocer tambien de todos los incidentes de este juicio, y de los autos que á él deban acumularse. Es aplicable á este caso lo que se espondrá sobre la misma materia, al tratar del concurso necesario, en el párrafo 3.° de la seccion V.

§. 2.° *Personas que pueden presentarse en concurso voluntario.*

La ley de Enjuiciamiento civil no hace declaracion, ni escepcion alguna, sobre este

punto: emplea siempre la palabra genérica *deudor*, dando con ella á entender que puede presentarse en concurso voluntario todo deudor que se encuentre en la aflictiva situacion de no poder pagar á sus acreedores, ya porque su *activo* sea inferior al *pasivo*; esto es, que sus bienes no alcancen á cubrir sus deudas; ya porque, en cualquier otro caso, no pueda realizar el metálico necesario para satisfacerlas á su vencimiento.

Pero aunque la ley, antes citada, nada haya declarado sobre este particular, por no ser de su incumbencia hacer la declaracion de derechos y obligaciones; sino el modo de realizarlos; la antigua jurisprudencia lo tenia establecido. La ley 1.ª, tít. 15, Part. 5.ª dice: «Desamparar puede sus bienes todo ome, que es libre, é estuviere en poder de sí mismo, ó de otri, non habiendo de qué pagar lo que deve.»

Esta es la regla general, que está en armonía con lo que dispone la ley de Enjuiciamiento, en su locucion genérica de *deudor*. Todo el que lo sea, y no tenga de qué pagar lo que debe, está comprendido en ella, aunque se halle en poder de otro, ó no tenga la libre administracion de sus bienes, como en términos hábiles sucede á los menores, incapacitados, mujeres casadas y corporaciones.

De consiguiente, pueden presentarse en concurso voluntario, no solo los deudores, que tengan la libre administracion de sus bienes; sino tambien aquellos que no son hábiles para contratar por sí mismos; si bien éstos deberán hacerlo por medio de sus representantes legítimos para comparecer en juicio.

Un requisito creemos, sin embargo, indispensable, para que puedan presentarse en concurso voluntario los menores é incapacitados, y para que pueda tener efecto la quita y espera, por deudas de que respondan ellos ó sus bienes: ese requisito es la autorizacion judicial, prévia la informacion de necesidad ó utilidad, conforme á lo prevenido en el tít. 13, 2.ª parte de la ley de Enjuiciamiento civil. El abandono ó cesion de bienes es una enajenacion que de ellos hace el deudor á favor de sus acreedores, y la quita ó espera una verdadera transaccion sobre sus derechos, y ni lo uno ni lo otro, cuando interesan á menores ó incapacitados, puede llevarse á efecto sin la autorizacion judicial. Esta habrá de solicitarse en el primer caso al presentarse en concurso, y en el segundo al pedirse la aprobacion del convenio de quita ó espera. De este modo se evitará que los menores contraigan obligaciones y compromisos, que acaso no sean legítimos, ó que, en vez de favorecerles, les causen verdadero perjuicio. De dicho requisito deberá considerarse dispensado el padre, administrador legítimo de los bienes del hijo, constituido bajo su patria potestad; porque la ley 9, tít. 19, Partida 6.ª le atribuye diversa consideracion, que á los demás guardadores, y le dispensa de obtener préviamente, para la enajenacion de los bienes de sus hijos, el decreto judicial, segun lo declarado por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias de 8 de Mayo de 1861, 13 de Febrero de 1864 y 25 de Octubre de 1866.

Como la cesion de bienes era considerada por nuestras antiguas leyes como un beneficio, establecido á favor de los deudores de buena fé, para que pudieran librarse de la prision preventiva, rehusaron este beneficio á los que creyeron indignos de él. En el párrafo 1.º, sec. II, del artículo CESION DE BIENES (pág. 596 del tomo 8.º) se hizo mencion de los deudores que se hallaban en este caso; que eran, los arrendatarios de rentas reales y sus fiadores; los que enajenasen ó malbaratasen sus bienes en fraude de los acreedores; los mercaderes y cambiantes, y los deudores por deudas procedentes de delito ó cuasi-delito. Respecto de estos últimos ya se dijo en dicho lugar, que están hoy sujetos á lo que dispone el art. 49 del Código penal. Y en cuanto á los demás, escepto los comerciantes, no procediendo en el dia la prision por deudas civiles, que fué el motivo de aquellas esclusiones, y no estinguiéndose tampoco por el concurso voluntario la accion criminal, cuando, al hacer la calificacion del concurso, resulten méritos para entablarla, carecen de objeto dichas escepciones, y debe por tanto prevalecer, como absoluta, la regla general de que puede presentarse en concurso voluntario

rio todo deudor que no tenga con que pagar lo que debe.

Respecto de los *comerciantes*, ya hemos dicho que el juicio de *quiebra*; y no el de *concurso* de acreedores, es el que procede contra ellos; mas para eso es indispensable que el deudor tenga la calidad legal de comerciante, ó que ejerza habitualmente el comercio, aunque no esté matriculado; y que las deudas y obligaciones hayan sido contraidas en el comercio, ó que procedan de operaciones mercantiles (1). En estos casos el deudor comerciante no puede presentarse en concurso voluntario, pues no puede sustraerse á la severidad de las leyes sobre quiebras, ni es permitido á nadie elegir una forma de juicio diferente á la determinada por la ley. Pero si el deudor no tiene la calidad de comerciante, ó si las deudas no proceden de operaciones y y negocios mercantiles, como en estos casos no puede ser declarado en quiebra, es legal y procedente su presentacion en concurso voluntario ante el juez de su domicilio (2).

§. 3.° *Requisitos para la declaracion del concurso voluntario.*

Para que el deudor, que se presenta en concurso voluntario, pueda obtener la declaracion consiguiente, á fin de atraer á este juicio universal á todos sus acreedores, y librarse de las molestias y gastos de las reclamaciones particulares, que pudiera entablar cada uno de ellos, acaso en distintos juzgados fuera de su domicilio, es preciso que acompañe á su solicitud ciertos documentos. El art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil los determina clara y concretamente, y los exije como requisito tan indispensable, que, segun el propio artículo, sin ellos no puede admitirse ninguna solicitud de concurso voluntario. De consiguiente, el juez debe repeler de oficio la demanda, cuando no se presente acompañada de los documentos exigidos por la ley. Estos documentos son:

1.° *Una relacion, firmada, de todos sus bienes, hecha con individualidad y exactitud.* Solo deben esceptuarse de esta relacion los bienes, que luego indicaremos. La ley se ha propuesto, con la presentacion de este documento, el que se tenga una idea exacta del haber activo del concursado; y previene que lleve la firma de este, el cual deberá ponerla por sí ó por su procurador, para poder exigirle la responsabilidad, si ocultase bienes con malicia.

Como los muebles han de constituirse en depósito, y en administracion los raíces, es necesario que la relacion de bienes, además de ser exacta, los especifique con toda claridad, deslindando los inmuebles con todas las circunstancias necesarias, para que, respecto de los mismos, se pueda tomar razon en los registros de la Propiedad correspondientes. Será conveniente, asimismo, se consigne la renta ó producto de cada uno de los inmuebles, y el nombre y domicilio de los inquilinos, arrendatarios, ó aparceros, á fin de que el depositario, primero, y despues los síndicos puedan comenzar su gestion administrativa con pleno conocimiento de causa.

De esta relacion solo deben esceptuarse, segun el mismo art. 506 de la ley citada, los bienes, que, con arreglo al 951, no pueden ser objeto de ejecucion: en este caso se hallan solamente el lecho cotidiano del deudor y de su mujer é hijos: las ropas del preciso uso de los mismos; y los instrumentos necesarios para el arte ú oficio, á que el primero pueda estar dedicado. Estos son los únicos bienes que puede reservarse el deudor, sin que la ley permita la escepcion de ningunos otros, ni aun por via de alimentos; pues estos han de ser objeto, en su caso, de una reclamacion especial, de que trataremos más adelante; ni tampoco por la propia razon, porque corresponda al deudor el *beneficio de competencia*, que la ley 1.ª, tít. 15, Part. 5.ª concede á los ascendientes, descendientes, cónyuges, consócios y donantes. (Véase BENEFICIO DE COMPETENCIA, *pág.* 78 *del tomo* 6.°) Ha de

(1) Arts. 1014 y 1015 del Código de comercio: Real órden de 30 de Noviembre de 1833; y sentencia, en casacion, del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Febrero de 1859.

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, *en casacion*, de 25 de Enero de 1858; *en competencia*, de 25 de Octubre de 1862, y *en injusticia notoria*, de 19 de Junio de 1863.

comprender, pues, dicha relacion todos los bienes, que en aquella fecha se hallen á disposicion del deudor y puedan ser objeto de ejecucion, aunque obren en poder de un tercero para su venta en comision (1). Tambien han de comprenderse los que el deudor hubiere comprado al fiado, y no haya pagado el precio, si le fueron entregados por el vendedor; pues por este hecho se hizo dueño de ellos: en tal caso el vendedor tendrá que acudir al concurso para reclamar el precio como uno de los acreedores (2). Sobre otras cuestiones relativas á los bienes que deben comprenderse en el concurso, véase el párrafo 5.° de la seccion V del presente artículo.

2.° *Un estado de las deudas, con espresion de su procedencia y de los nombres y domicilios de los acreedores.* Siendo necesario conocer desde el primer trámite del juicio de concurso la verdadera situacion del deudor, la ley exige de éste la manifestacion, no solo de sus bienes; sino tambien de sus deudas, para evitar en lo posible la suposicion fraudulenta de créditos, y para poder convocar inmediatamente á los acreedores. Como la manifestacion del número y naturaleza de los créditos puede envolver alguna responsabilidad para el que la hace, el deudor deberá suscribir tambien la relacion de deudas, la cual, lo mismo que la de bienes, deberán estenderse en el papel sellado, que corresponda al importe total del activo del concursado, que ha de servir de base al juicio.

3.° *Una memoria, en que se consignen las causas, que hayan motivado su presentacion en concurso.* Esta disposicion está tomada del art. 1018 del Código de comercio, el cual dispone, que la memoria que ha de acompañar el quebrado, ha de espresar las causas directas é inmediatas de su quiebra. La ley ha querido ante todo conocer las causas verdaderas, que han obligado al deudor á presentarse en concurso voluntario, á fin de que los acreedores puedan graduarlas y apreciarlas, si el deudor solicita la quita ó espera. Esta memoria, aunque la ley no lo dice espresamente, deberá tambien ir firmada por el deudor, por la misma razon que debe firmar la relacion de bienes y deudas, como para el juicio de quiebra lo exige terminantemente el art. 1021 del Código de comercio. Y como dicha memoria ha de ser la justificacion de la situacion del deudor y la base del juicio de calificacion del concurso, será muy conveniente acompañar á la misma los documentos, que justifiquen los hechos que alegue el deudor, para presentarse en concurso voluntario.

La ley ha dado tal importancia á la presentacion de los tres referidos documentos, que dispone terminantemente, como ya se ha indicado, que sin ellos no se admitirá ninguna solicitud de concurso voluntario. Por esta razon, si deja de presentarse con la demanda alguno de esos tres documentos, el juez debe repelerla de oficio; pero si se llenan cumplidamente dichos requisitos, no puede menos de admitirla y declarar al deudor en concurso voluntario. En el primer caso, el deudor podrá pedir reposicion de la providencia, dentro de tres dias; y si no se accede á ella, apelar dentro de otros tres dias, cuya apelacion deberá admitirse en ambos efectos; y en el segundo caso, cualquiera de los acreedores podrá oponerse á la declaracion del concurso, si considera que no se han llenado los requisitos legales. Esta oposicion deberá sustanciarse en la propia forma que espondremos en la seccion V, §. 4.°, para la que se haga á la declaracion del concurso necesario.

§. 4.° *Procedimientos.*

El art. 519 de la ley de Enjuiciamiento civil ordena que «cuando se pida simplemente la formacion de concurso voluntario, se acomodará la sustanciacion á las reglas establecidas para el concurso necesario.» De este precepto general y absoluto debiera deducirse, que todas las disposiciones de dicha ley, comprendidas en la seccion 2.ª del tít. XI, que trata *del concurso necesario*, y que pueden verse en la *parte legislativa*, son aplicables al concurso voluntario; y sin embargo, no es así, porque las hay propias y esclusivas

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en competencia, de 13 de Noviembre de 1862.
(2) Sentencia de id., en id., de 21 de Febrero de 1861.

de aquel juicio, que no pueden tener aplicacion á este. Basta el buen sentido para hacer este deslinde.

El art. 531, por ejemplo, y los siguientes, tratan de la oposicion del deudor á la declaracion del concurso, y tal oposicion no puede tener lugar en el voluntario, puesto que dicha declaracion se hace á instancia del mismo deudor: en este juicio la oposicion podrá venir de los acreedores, y en tal caso habrá de sustanciarse y decidirse en la forma que dichos artículos previenen. El 538 ordena, que «consentida ó ejecutoriada la declaracion de concurso, el juez mandará hacer saber al concursado, que en el término de segundo dia presente relacion de sus acreedores, con la oportuna manifestacion de las causas de su estado;» y esto tampoco puede tener aplicacion al concurso voluntario, puesto que la relacion y memoria antedichas ha debido presentarlas el deudor necesariamente con la demanda; y así de alguna otra disposicion. La ley ha establecido aquella regla general, contando con el criterio racional de los jueces, que sabrán discernir lo que es comun, y lo que es propio de uno y otro juicio, atendida la diferente forma de incoarlos. Por estas indicaciones no podemos referirnos en absoluto al procedimiento del concurso necesario, que se espondrá en la seccion V, y creemos conveniente consignar aquí lo que ha de practicarse, para proceder con acierto y conforme á la ley, en las primeras actuaciones del concurso voluntario.

Luego que el deudor presente su solicitud, con los documentos y requisitos espresados en el párrafo 3.° de esta seccion, el juez dictará providencia teniendo por hecha la cesion de bienes, en cuanto há lugar en derecho, y declarando el concurso voluntario. En la misma providencia decretará el embargo y depósito de los bienes del deudor, la ocupacion de sus libros y papeles, y retencion y exámen de su correspondencia, en la propia forma que en el concurso necesario; si bien para las medidas respecto de los bienes, servirá de base la relacion de ellos presentada por el mismo deudor. A la vez acordará lo conducente para la acumulacion, que se haya pedido, de autos pendientes en el mismo ó en otros juzgados, y dictará las demás providencias, que sean necesarias á los fines antedichos.

Sin perjuicio de las medidas indicadas, mandará tambien el juez fijar edictos en los sitios públicos é insertarlos en los periódicos del pueblo, si los hubiere, en el *Boletin oficial* de la provincia, y tambien en la *Gaceta de Madrid*, cuando la importancia y circunstancias del concurso lo requieran, anunciándolo y llamando á los acreedores para que se presenten, dentro de 20 dias, con los títulos justificativos de sus créditos, como se previene en el párrafo 2.° del art. 538. Y trascurrido este plazo, convocará á junta general de acreedores para el nombramiento de síndicos, señalando el dia, hora y sitio de la reunion, para lo cual tendrá presente que, entre esta y la convocatoria, han de mediar otros 20 dias, por lo ménos. Esta citacion será personal á los acreedores, comprendidos en el estado de deudas, y á los que, sin estarlo, se hubieren presentado en el juicio, y además se hará por medio de edictos por si hubiese acreedores ignorados (arts. 508, 509 y 540).

En el dia señalado se procederá á la celebracion de la junta, para el nombramiento de síndicos. Solo pueden concurrir á ella los acreedores, que hayan presentado, ó presenten en el acto, los títulos de sus créditos. Los que no hayan llenado este requisito, no pueden ser admitidos á tomar parte en las deliberaciones de dicha junta, aunque estén incluidos en la relacion ó estado de las deudas. Esta junta se celebrará en la forma que previene el art. 541 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya disposicion, y las de todos los artículos que le subsiguen, son ya aplicables á uno y otro concurso, como lo son tambien las anteriores, salvas las que no pueden tener aplicacion, sino al concurso necesario, segun hemos dicho. Teniendo, pues, presentes estas indicaciones, véase el procedimiento, que luego espondremos, para el concurso necesario, al que ha de acomodarse tambien el del voluntario.

En estos juicios pueden ocurrir varios incidentes; unos, previstos por la ley, como la oposicion á los acuerdos de las juntas, conve-

nio, alimentos del concursado, y otros varios; y otros, que no se hallan previstos especialmente. Aquellos deberán sustanciarse por los trámites que ha determinado la ley; y los segundos, de la manera prevenida respecto de los que tengan lugar en el juicio ordinario. La regla general que establece el artículo 520 de la citada ley de Enjuiciamiento, para que se sustancien en la forma establecida para los incidentes que ocurran en el juicio ordinario, los que tengan lugar en el de concurso y sus piezas separadas, no puede aplicarse sino á los que no tengan señalada por la ley una tramitacion especial; pues si la tienen, deberá ser guardada, como una escepcion de dicha regla general.

SECCION IV.

DE LA QUITA Y ESPERA.

Todo deudor puede proponer á sus acreedores, que le perdonen ó hagan condonacion de una parte de sus créditos respectivos, á condicion de pagarles el resto sin necesidad de reclamaciones judiciales; ó que le concedan una dilacion ó *moratoria*, para pagarles en uno ó mas plazos; ó ambas cosas á la vez, esto es, que le condonen parte de las deudas y le concedan un plazo para pagar el resto. Estos convenios entre el deudor y sus acreedores han sido siempre autorizados por nuestras leyes (1), dándoles el nombre de *quita*, en el primer caso; de *espera* en el segundo, y de *quita* y *espera* en el tercero. Y la propia denominacion se dá á los juicios, que promueven los deudores con el objeto de conseguir la realizacion de tales convenios.

Como la quita y espera producen una novacion de contrato, en buenos principios solo pueden otorgarlas los acreedores por convenio con el deudor comun, y este es el derecho hoy vigente. Tambien lo ha sido en todos tiempos respecto de la *quita* (2): no así en cuanto á la *espera*, pues por altas consideraciones sociales ó del servicio público, el Rey por sí, ó á consulta del Consejo, concedia esperas, y moratorias para el pago de las deudas (1); pero hoy está tambien prohibida la concesion de esta gracia, como ya se ha dicho, á fin de que «no se hagan ilusorios los derechos que emanan de las obligaciones contraidas legalmente, con menoscabo de la fé pública y de la santidad de las leyes (2).»

El convenio de quita ó espera, puede celebrarse judicial y estrajudicialmente. En este segundo caso solo obliga á los contratantes, y no á los acreedores, que no tuvieron en él intervencion alguna, ni lo consintieron (3). Para que sea obligatorio á todos los acreedores, salvo los esceptuados espresamente por la ley, es indispensable que se celebre judicialmente con las formalidades prevenidas por la misma ley. A este fin, debe el deudor promover el correspondiente juicio, llamado tambien de *concurso voluntario*, segun se ha dicho, por las circunstancias de incoarse á instancia del propio deudor y de tener que concurrir á él todos los acreedores. Es verdad que por ese medio algunos de estos tienen que someterse, contra su voluntad, á la rebaja ó aplazamiento de sus créditos; pero dada la imposibilidad en el deudor de pagar al corriente, no seria justo que el mayor número sufriera los perjuicios de la intransigencia de los menos, y por eso la ley ha establecido que las minorías se subordinen á los acuerdos de las mayorías. Al ordenar este procedimiento la ley de Enjuiciamiento civil, ha establecido las garantías posibles en favor de las minorías, como luego veremos.

No pone la ley limitacion alguna al deudor, respecto al período del juicio, en que podrá hacer á sus acreedores las proposiciones de quita y espera; antes bien dá á entender que puede hacerlas, tanto antes, como despues de

(1) Leyes 5.ª y 6.ª, tít. 15, Part. 5.ª.

(2) La ley 32, tít. 18, Part. 3.ª dispone que no debe valer ni ser obedecida por los jueces, la carta que el Rey otorgare, concediendo á alguna persona perdon de lo que debe á otra, *por ser tal carta contra el derecho natural*. Lo propio confirma la ley 4.ª, tít. 24, de la misma Partida.

(1) Leyes 33, tit. 18, y 4.ª, tit. 24, Part. 3.ª, y las del tit. 23, lib. 11, Nov. Rec.

(2) Real decreto de 21 de Marzo de 1834.

(3) Sentencia del Tribunal Supremo de Just., en casacion de Ultramar, de 25 de Setiembre de 1861.

incoado el concurso voluntario, ó el necesario. En cada uno de estos dos casos se sigue diferente procedimiento. Si la quita ó espera se solicita antes de la declaracion del concurso, y aun tal vez para evitar las consecuencias legales de esa declaracion, debe sustanciarse el juicio por el procedimiento especial establecido en los arts. 507 y siguientes de la citada ley de Enjuiciamiento, que vamos á esponer en la presente seccion; pero si se solicita despues, debe sustanciarse conforme á lo prevenido para el *convenio* en los artículos 611 y siguientes, de que tratarémos en la seccion VI. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de casacion, de 26 de Mayo de 1859, estableciendo á la vez que, en el segundo caso, la oposicion al acuerdo de la junta de acreedores no debe subordinarse, en cuanto al término para interponerla, á lo que para el primer caso prescribe el art. 513; sino al 625 y siguientes de la propia ley.

Puede suceder tambien que la quita ó espera se solicite simultáneamente con la declaracion de concurso. En este caso, no previsto en la ley, creemos que para determinar el procedimiento es indispensable atender á la fórmula de la demanda. Si se pide en primer término la quita ó espera, y preventivamente para el caso de no concederse, la declaracion de concurso voluntario, así deberá hacerse, principiándose por el juicio especial de quita y espera; pero si se invierten los términos, solicitando en primer lugar la declaracion del concurso, deberá procederse en la forma espuesta en el párrafo último de la seccion anterior, adoptando las medidas, que allí se indican, para la seguridad de los bienes, y al convocarse la junta de acreedores para el nombramiento de síndicos, se espresará que se tratará tambien en ella de la quita y espera. Este será el primer punto, que se pondrá en ella á discusion y votacion: si se aprueba, no se hará el nombramiento de los síndicos, por ser ya innecesario, y se procederá, como está prevenido para el convenio; pero si se desestiman la quita ó espera propuestas, se hará en seguida la eleccion de los síndicos y se continuará el juicio de concurso.

Espuestas estas consideraciones generales, veamos el procedimiento especial de la quita y espera; acreedores á quienes obliga el acuerdo favorable de la junta, y oposicion que contra él puede entablarse.

§. 1.° *Procedimiento especial para la quita y espera: convocacion de la junta de acreedores.*

Cuanto hemos espuesto en los tres primeros párrafos de la seccion anterior, respecto á juez competente, personas que pueden presentarse en concurso voluntario y requisitos con que han de hacerlo, para que sea admisible la solicitud, es aplicable á los juicios de *quita* y *espera*.

Presentado el pedimento del deudor, solicitando ambas cosas, ó cualquiera de ellas, si va acompañado de las relaciones de bienes y deudas y de la memoria, que determina el artículo 506 de la ley de Enjuiciamiento civil, el juez debe mandar *inmediatamente* que se convoque á junta de acreedores (art. 507). Ese adverbio, usado por la ley, significa que la convocacion ha de acordarse sin dilacion, y solo en vista de la demanda, si llena los requisitos legales, sin otros trámites, y sin que pueda entorpecerla la oposicion de ninguno de los acreedores. Al propio tiempo debe el juez designar el dia, hora y sitio, en que haya de verificarse la junta, señalando término bastante, para que puedan concurrir á ella todos los acreedores, que residan en la Península. Se deja, pues, este punto á la prudencia del juez, el cual tendrá en consideracion la mayor distancia, á que se hallen los acreedores, segun su respectivo domicilio, espresado en la relacion de deudas, los medios de comunicacion y las demás circunstancias, que deben apreciarse en tales casos.

Sin duda con el objeto de evitar dilaciones, que pudieran ser perjudiciales, se habrá dictado la disposicion antedicha del art. 507, previniendo que el plazo para la reunion de la junta, sea el necesario para que puedan concurrir á ella, no todos los acreedores; sino solamente los que residan en la Península. Pero podrá suceder que estos, aun suponién-

dolos á todos conformes, no reunan las tres quintas partes del total pasivo del concurso, ó sea la mayoría de cantidades que exije el artículo 511, para que sea válido el acuerdo de la junta. Como en tal supuesto seria ilusoria é ineficaz la reunion de los acreedores, toda vez que no podrian tomar acuerdo, creemos que el juez procederá conforme al espíritu de la ley, señalando el plazo suficiente para que puedan concurrir tambien á la junta los acreedores que residan en el estranjero ó en Ultramar, y que de todos modos han de ser citados personalmente, segun el artículo 508: lo contrario equivaldria á privar al deudor, en tal caso, del derecho que le concede la ley para solicitar la quita ó espera; y cuando la ley concede un derecho, se suponen concedidos los medios indispensables para hacerlo efectivo. El deudor, que es el demandante, allanará la dificultad, haciendo ver la imposibilidad de que la junta pueda tomar acuerdo, sin la concurrencia de los acreedores que residan fuera de la Península, y solicitando se conceda el término suficiente para que puedan concurrir. El juez no podrá menos de acceder á esta solicitud, por las razones indicadas, y porque es además un contrasentido el que se les haya de citar personalmente y no se les conceda el tiempo necesario para concurrir á la junta.

Señalado el dia de la junta y acordada la citacion de los acreedores, debe darse á lo uno y á lo otro la publicidad debida, á fin de que, llegando á conocimiento de todos los acreedores, aun los ignorados, puedan hacer uso de su derecho. Esto se hará por medio de los correspondientes edictos, que se publicarán en la forma acostumbrada é insertarán en los periódicos del pueblo, en cuyo juzgado radicare el juicio, si los hubiere; en el *Boletin oficial* de la provincia, y cuando la importancia y circunstancias del concurso lo exigieren, á juicio del juez, en la *Gaceta de Madrid* (art. 509). Sin perjuicio de esto, segun el art. 508, han de ser citados individual ó personalmente los acreedores, espresados en el estado de deudas, haciéndose esta citacion en la forma que está prevenida en los artículos 228 y siguientes de la propia ley de Enjuiciamiento, para los emplazamientos del juicio ordinario. Véase **EMPLAZAMIENTO**.

Cuando la *quita* y *espera* se solicitare antes de la declaracion de concurso, que es el caso de que tratamos, como entonces no ha habido posibilidad de que los acreedores hayan justificado préviamente sus respectivos créditos, la ley (art. 510) dispone, que tanto en las cédulas de citacion, como en los edictos, se prevendrá que los acreedores se presenten en la junta con el título de su crédito, bajo apercibimiento de no ser admitidos de lo contrario. «El objeto de esta innovacion, ha dicho Gomez de la Serna, en los *Motivos de la ley de Enjuiciamiento civil*, ya citados, es poner una barrera más á los fraudes, evitar confabulaciones criminales del deudor con los que realmente no sean acreedores suyos, para aparentar un pasivo mayor que el que en realidad exista, é impedir que una mayoría falsa y amañada decida de la suerte de los créditos verdaderos.» Pero estos loables propósitos del legislador no han sido bastantes para impedir esa inteligencia contra los legítimos acreedores, y algun caso pudiera citarse, en que, para alcanzar la aprobacion de la *quita* y *espera*, propuestas por el deudor, se ha comenzado por escluir una de sus deudas más importantes, falseando el fundamento de la ley y burlando sus preceptos. Tales abusos tienen su correctivo, y pueden dar motivo á la impugnacion de los acuerdos de la junta, como luego se espondrá.

§. 2.° *Celebracion de la junta de acreedores, y efectos de sus acuerdos.*

Llegado el dia designado para la celebracion de la junta, tendrá ésta lugar bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano actuario. A aquel corresponde dirigir la discusion y procurar el cumplimiento de la ley; y á éste estender el acta y certificar el acuerdo que adopten los acreedores. Ante todo deberá resolverse, como ya se ha indicado, quiénes son los acreedores que, por haber presentado el título justificativo de su crédito, pueden tomar parte en las deliberaciones de la junta. La ley no ha determinado

espresamente á quién corresponde la resolucion de este punto y el exámen prévio de los títulos; si al juez ó á la junta. Si fuese de la competencia de ésta, produciria el efecto de prejuzgarse por verdaderos interesados los derechos de aquel, que presenta un comprobante de un crédito que el deudor ha confesado. Atendido el silencio de la ley y los términos en que están concebidos los arts. 510 y 511, creemos que en la junta, convocada para discutir y resolver sobre la quita y espera, no debe tratarse de ningun otro particular, ni entrar á escluir créditos, cuyos justificantes se hayan presentado. El juez será quien deba resolver por sí, sobre la admision de cada uno de los acreedores, ya se presenten en el acto, ya lo hayan hecho anteriormente; y si entre éstos hubiere alguno simulado, el que pueda probarlo tendrá el derecho de impugnar el acuerdo sobre *quita ó espera*, con arreglo á las causas 3.ª y 4.ª del art. 513 de la ley, siempre que el acreedor reclamante no haya concurrido á la junta, ó concurriendo, haya disentido y protestado contra el voto de la mayoría.

Los acreedores podrán comparecer personalmente, ó por medio de procurador con poder especial al efecto; pero si un procurador tuviera diferentes representaciones, éstas se computarán como un sólo voto; si bien por la cantidad total que representen, para el efecto de determinar las mayorías de número y cantidad que la ley exige, á fin de que la junta pueda deliberar y acordar válidamente.

Constituida así la junta, se dará principio á ella, segun previene el art. 511, por la lectura de los artículos de la ley de Enjuiciamiento, que se refieren al objeto de su convocacion, que son el 507 al 518; de la solicitud que la haya motivado, y de la relacion, estado y memoria, que la acompañen, y se abrirá el debate sobre la procedencia y concesion de la quita y espera, solicitada por el deudor. Sobre este punto, único que puede resolver la junta, versará la discusion, pudiendo hablar dos acreedores en contra y dos en pró, si se hubiere pedido la palabra en estos sentidos, y el deudor ó su representante, si concurren, las veces que consideren necesarias.

Discutida en estos términos la solicitud de *quita* y *espera*, el debate podrá cerrarse, acordándolo así la mayoría de asistentes, de lo cual se infiere que será potestativo en los acreedores prolongar la discusion. Cuando ésta termine, el juez formulará en términos claros y precisos la cuestion que haya de votarse, y se abrirá la votacion sobre la cuestion propuesta por el juez, el cual será quien regule la discusion en general y quien procure que ésta no se estravíe con recriminaciones personales, agenas á la conciliacion propuesta por el deudor. Si se trata únicamente de *quita*, no bastará resolver genéricamente que ésta se concede; sino que habrá de espresarse la parte de la deuda que se condona al deudor, ya por el capital, ya por los intereses. Si se trata de *espera* deberá determinarse tambien el plazo por que ésta se concede.

Puesta á votacion la *espera* ó la *quita*, ó ambas cosas, la ley exige que aquella sea siempre nominal y que se consigne en el acta que se estienda. La votacion nominal tiene por objeto el consignar el voto de cada uno de los acreedores, lo cual es necesario en caso de divergencia para resolver, si la proposicion del deudor ha reunido á su favor las dos mayorías que previene la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 511 ya citado. Esta declara, como principio general para esta clase de votaciones, que el voto de la mayoría formará el acuerdo; mas para que haya mayoría se necesita precisamente: «1.° que se reunan dos terceras partes de votos de los acreedores concurrentes á la junta; y 2.° que los créditos de los que concurran con sus votos á formar la mayoría, importen, cuando ménos, las tres quintas partes del total pasivo del concurso.» En esta parte el legislador buscó la garantía del mayor número y del mayor interés, y amplió la disposicion de la ley 5.ª, tít. 15, Part. 5.ª, que solo exigia para conceder la quita y espera, *la mayor quantia en los debdos*, y la del art. 1153 del Código de comercio, que sólo exige en las quiebras una mayoría de las tres quintas partes del pasivo del deudor.

Pero en muchos casos acontece que no ha podido reunirse la mayoría legal, ni por con-

siguiente constituirse la junta: en tal supuesto el juez deberá hacer sobre este punto la declaracion consiguiente, dando por terminado el juicio, si bien el deudor tendrá el derecho de pedir que se convoque de nuevo la junta, reproduciendo su solicitud de quita y espera, con las mismas ú otras condiciones.

Si constituida la junta con el número suficiente de acreedores, el acuerdo favorable no reuniese las dos mayorías de número y cantidad, entónces la quita ó espera se entenderá desechada, por que la ley exige dichas dos mayorías, como necesarias precisamente para que haya acuerdo legal, favorable á la solicitud del deudor. Esta falta de concurrencia de las dos mayorías produce el mismo efecto que el acuerdo denegatorio de la quita ó espera. Segun el artículo 512, en estos casos «queda concluido el juicio y en libertad los interesados para hacer uso de los derechos que puedan corresponderles;» pero esto deberá entenderse limitado al caso, en que el deudor haya deducido tan solo la solicitud de quita ó espera: si al propio tiempo solicitó ser declarado en concurso voluntario, el juicio continuará en este concepto, acomodando su sustanciacion á las reglas establecidas para el concurso necesario, como ya se ha dicho.

El acuerdo de la mayoría, favorable á la pretension del deudor, concediéndole la quita ó espera, produce el efecto de obligar, no solo á los acreedores, que otorgaron este beneficio; sino tambien á los que constituyeron la minoría, que votó en contra, y á todos los demás que no concurrieron á la junta. Todos los acreedores, con las escepciones que indicaremos á continuacion, quedan obligados á estar y pasar por el convenio que hubiere aprobado la mayoría. Y no puede ser otra cosa: las minorías tienen que subordinarse á las mayorías, porque de otro modo no habria acuerdo ni resolucion posible; ni seria justo que, por la intransigencia de unos pocos no pudiera la mayoría realizar lo que cree más conveniente á sus intereses. La ley ha establecido ciertos requisitos y solemnidades que sirven de garantía á las minorías: no es de poca importancia el de que la mayoría no sea la relativa, ni aun la absoluta; sino que han de concurrir á formarla los voto de las dos terceras partes de los acreedores concurrentes á la junta, siendo además requisito indispensable que sus créditos importen cuando menos las tres quintas partes del total pasivo del concurso, como ya se ha dicho. Con tales garantías para las minorías, justo es, é imprescindible además, que prevalezca el acuerdo de la mayoría, y que los efectos del convenio aprobado por esta alcancen á todos los acreedores.

Pero no todos se encuentran en iguales condiciones: los hay que tienen un derecho preferente á los demás, amparado por la ley, y no seria justo despojarles de ese derecho, contra su voluntad, por el voto de una mayoría de acreedores comunes, é interesados por tanto en que desaparezcan las preferencias. Por esta razon, y á ese fin, en el art. 511 se declara, que «los acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos de funeral, ordenacion de última voluntad y prevencion de testamentaría ó ab-intestato, así como los hipotecarios legales y por contrato, pueden abstenerse de tomar parte en esta votacion: si se abstuvieren, no quedan obligados á estar y pasar por lo acordado; y si tomaren parte en la votacion, quedarán obligados como los demás acreedores.» La regla establecida es clara y terminante. De este modo los acreedores, que se hallan en los casos 1.°, 2.° y 3.° del art. 502, que son los antedichos, no pueden ser perjudicados en su preferente derecho por los escriturarios y comunes, con lo cual se evita que, reunidos éstos en mayor número y cantidad, dispongan á su arbitrio de los créditos hipotecarios legales, ó por contrato, y aun de aquellos, que por trabajo personal y por alimentos han sido siempre preferidos. Será potestativo en todos estos tomar ó no parte en las votaciones, y la ley equipara lo primero á una renuncia de la preferencia, y traduce lo segundo como una manifestacion espresa de no querer convenirse con perjuicio de su derecho.

Muchas veces acontece que los acreedores preferentes, ó no concurrieron á la junta, ó no tomaron parte en la votacion, á pesar de

lo cual se les hace saber la providencia aprobando el convenio y mandando llevarlo á efecto; y casos ha habido en que, por haber consentido el auto de aprobacion, se ha sostenido con empeño que el acreedor preferente quedaba sujeto á los efectos de lo convenido. Consideramos equivocada esta opinion respecto de los acreedores preferentes, que habiendo concurrido á la junta, se abstuvieron de votar: por este solo hecho, adquieren el derecho de que su preferencia sea respetada, y de que el convenio no les obligase; y esta escepcion terminantemente declarada por la ley, no puede invalidarse porque el auto de aprobacion del convenio se notifique á todos los acreedores del deudor, pues esta notificacion no puede hacer estensivos los efectos del convenio á aquellos, á quienes la ley dejó en libertad de convenirse, y no han querido adherirse al convenio. No así en cuanto á los que no concurrieron á la junta: estos no han podido manifestar su voluntad por el medio que autoriza la ley: pueden hacerlo, conforme al art. 515, protestando en el acto de notificarles el acuerdo de la junta ó en los cinco dias siguientes. Bastará esta protesta para que les quede reservado su derecho de preferencia; pero si no la hacen y consienten la providencia y el acuerdo, se entenderá que se adhieren al convenio, lo propio que el que, habiendo concurrido á la junta, tomó parte en la votacion. Esto parece lo racional, y lo que creemos conforme á la letra y espíritu de la ley, y á los buenos principios.

Previendo la ley que podrá prescindirse de los requisitos establecidos como garantía á favor de las minorías, ó que podrán cometerse otros abusos en perjuicio de las mismas, todavía lleva más adelante su proteccion, permitiéndoles que puedan oponerse al acuerdo de la mayoría favorable al deudor, por las causas y en la forma que vamos á esponer.

§. 3.° *Oposicion al acuerdo otorgando la quita ó espera.*

Para que haya acuerdo en las juntas, convocadas con el objeto de tratar de la quita ó espera solicitada por el deudor, es indispensable, como ya se ha dicho, que voten una misma cosa las dos terceras partes de los acreedores concurrentes á la junta, y que los créditos de los que voten en el mismo sentido importen, cuando ménos, las tres quintas partes del total pasivo del concurso. De suerte que cualquiera que sea el número de acreedores que concurra, la junta se constituirá y deliberará legalmente, siempre que los créditos de los concurrentes importen las tres quintas partes del pasivo, por lo menos. Si no llegan á esta cantidad, no puede haber junta, y de consiguiente quedará el negocio terminado ó como no intentado, á no ser que el deudor lo promueva de nuevo, solicitando segunda convocacion de la junta para tratar del propio asunto bajo las mismas ú otras proposiciones. Aunque los acreedores concurrentes representen las tres quintas partes del pasivo total, si no las reunen los que voten á favor de la quita ó espera, se entiende desechado el convenio, lo propio que cuando lo es por acuerdo espreso denegatorio, y entonces se tiene por concluido el juicio, quedando en libertad los acreedores para hacer uso de su derecho como crean conveniente. Y solo en el caso de que á favor de la quita ó espera se reunan las dos mayorías de votos y cantidades antes indicadas, es cuando hay acuerdo favorable al deudor.

Este acuerdo es el único que puede ser impugnado, porque es tambien el único que puede causar perjuicios irreparables. Mas, para que sea admisible la impugnacion, el artículo 515 de la ley de Enjuiciamiento civil exije dos requisitos indispensables: 1.° que se presente el escrito de oposicion dentro de los ocho dias siguientes al de la junta (1); y 2.° que esto se haga por cualquier acreedor que no haya concurrido á la junta, ó que haya disentido y protestado contra el voto de la mayoría. El derecho, pues, de impugnar el

(1) En el pleito á que se refiere la sentencia, que se cita en la nota subsiguiente, se presentó dentro de los ocho dias el escrito oponiéndose simplemente al acuerdo; pero no se formalizó la oposicion hasta muchos dias despues. Por esta razon se objetó que era estemporánea la impugnacion; pero se dió lugar á ella, estimándola como presentada en tiempo oportuno. Véase dicha nota.

convenio no se concede á todos los acreedores; sino solo á los no concurrentes á la junta, y á los que habiendo concurrido á ella, disintieron de la mayoría y protestaron contra el voto de ésta, cuya protesta deberá consignarse en el acta. Ningun otro acreedor puede ejercitar ese derecho, aunque haya votado en contra, si no protestó en el acto contra el voto de la mayoría, y mucho menos los hipotecarios y privilegiados, á quienes no obligue lo convenido por haberse abstenido de votar.

Las causas, en que puede fundarse la impugnacion al convenio concediendo la quita y espera, las marca taxativamente el art. 513, antes citado, y todas ellas se refieren á las formas y al fondo del convenio, para evitar que las mayorías abusen de las minorías, y puedan ser perjudicados los derechos legítimos por los que no lo son. Las causas que la ley determina, como *únicas* para impugnar los acuerdos sobre quita y espera, son:

1.ª *Defecto en las formas establecidas para la convocacion, celebracion y deliberacion de la junta.* Las formalidades para cada uno de dichos actos están marcadas en los arts. 507 al 511, ambos inclusive, y las hemos espuesto en los dos párrafos anteriores. Siempre que se haya faltado á alguna de dichas formalidades, el procedimiento encerrará un vicio de nulidad, que afecta á la validez del convenio celebrado con el deudor. El Tribunal Supremo de Justicia tiene declarado que, cuando los acreedores aceptan proposiciones de quita y espera, hechas por el deudor, que llevan en sí envuelta la renuncia de derechos, pertenecientes á personas ajenas al juicio, y que no tuvieron en él intervencion, estralimitan el *objeto de la convocacion* de la junta, produciendo una verdadera nulidad; y en su virtud no se dió lugar al recurso de casacion contra la sentencia que declaró nulo y de ningun valor ni efecto un convenio de quita y espera, en la parte en que se cometió el indicado defecto, haciendo aplicacion de la causa 1.ª de que tratamos (1). Esta es una interpretacion lata de dicha causa: la ley solo habla de defecto en las *formas* establecidas para la convocacion y deliberacion de la junta, y en el caso á que se refiere dicha sentencia, no se atacaron las *formas*; sino el *fondo* del acuerdo de la junta de acreedores.

2.ª *Falta de personalidad ó representacion en alguno de los que hayan concurrido con su voto á formar la mayoría.* La falta de personalidad ó de representacion consiste en carecer de poder bastante el apoderado, que concurrió á la junta en nombre de algun acreedor, y tambien en no acreditar el carácter con que se presentó el acreedor, cuando el derecho que reclame provenga de habérselo otro trasmitido; como asimismo por no hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (1). Pero no basta que estos defectos puedan imputarse á alguno de los que concurrieron á la junta: es necesario que haya tomado parte en la votacion, y que su voto fuera necesario para formar la mayoría. Concurriendo dichas circunstancias, el convenio deberá dejarse sin efecto y reponerse el juicio al estado de junta, prévias las formalidades que la ley establece.

3.ª *Inteligencias fraudulentas entre uno ó más acreedores del deudor, para votar á favor de la quita ó espera.* Como toda confabulacion entre el deudor y sus acreedores vicia en daño de tercero el libre consentimiento,

---

la ley de Enjuiciamiento civil, al determinar el modo y forma con que el deudor comun puede convenirse con sus acreedores, acerca de la quita y espera, que haya solicitado de los mismos, para el pago de sus respectivos créditos, no se estiende á terceras personas, que son ajenas, ó no tuvieren intervencion en el juicio:

Considerando que, bajo tal concepto, los acreedores de D. José María Rincon, al aceptar en absoluto sus proposiciones, en las que iba envuelta la renuncia de derechos propios y ajenos, estralimitaron el objeto de la convocacion, produciendo una verdadera nulidad, que fué reclamada oportunamente y apreciada por la Sala en el fallo, cuya casacion se solicita, sin que por tanto pueda decirse que se han infringido los citados artículos, como ni tampoco las leyes de Partida, que se citan (son la 5.ª y 6.ª, tít. 15, Partida 5.ª), y que se hallan derogadas por aquellos »

(1) Arts. 19 y 18 de la ley de Enjuiciamiento

que debe suponerse en todo convenio, la ley ha castigado todas las inteligencias que sean fraudulentas, es decir que envuelvan un engaño y que no representen la voluntad de los acreedores. Cuando tal acontece, aunque el resultado de dichas inteligencias fraudulentas no altere las mayorías legales establecidas, lo convenido será ineficaz.

Y 4.° *Exageracion fraudulenta de créditos, para procurar mayoría de cantidad.* Si el deudor alterase la realidad de sus deudas, suponiendo en daño de tercero lo que no habia existido, cometeria por solo este hecho el delito de falsedad ó un abuso punible: habria fraude y engaño; y un convenio, que descansara sobre esta base, no podria ser obligatorio, prescindiendo de la responsabilidad criminal, en que incurriria al deudor.

El convenio sobre quita ó espera solo puede ser impugnado por alguna de las cuatro causas antes referidas, puesto que la ley las fija y determina como únicas, en que puede fundarse la impugnacion. Esta oposicion debe sustanciarse en vía ordinaria.

En ella serán parte, segun el art. 517, los que la hayan formulado y los acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la junta, en cuyo caso estos litigarán unidos, bajo una misma direccion y representados por un solo procurador. Lo mismo harán los opositores, si fuesen varios. El deudor puede ser parte en este juicio, en cuyo caso, deberá tambien litigar unido con los que sostengan sus mismas pretensiones. El art. 518 declara que la providencia, que recayere en el juicio de oposicion al convenio, es apelable en ambos efectos; declaracion, que pudo escusarse, por ser esa la regla general para todas las sentencias que se pronuncian en los juicios ordinarios.

Concedido á los acreedores el derecho de impugnar el acuerdo de *quita y espera*, cuando concurra alguna de las causas antes espuestas, era necesario que la ley fijara un plazo para formalizar dicha reclamacion, á fin de que no queden en incierto indefinidamente los derechos de los interesados, y que determinara los efectos que producia el no formalizarla. A este propósito el artículo 514 dispone que «pasados los ocho dias, sin haberse hecho oposicion, traerá el juez los autos á la vista y dictará providencia, mandando llevar á efecto el convenio y condenando á los interesados á estar y pasar por él. Tambien dictará para su ejecucion las providencias que correspondan, á instancia siempre de parte legítima.» Estas últimas palabras demuestran que el juez nada debe hacer de oficio, como es regla general en todos los juicios civiles, y que trascurrido los ocho dias, que la ley concede para la impugnacion, término que debe considerarse improrogable, segun el número 11 del art. 30 de la propia ley de Enjuiciamiento, siempre que algun interesado lo pretenda, el convenio de quita ó espera deberá aprobarse, condenando á los interesados á estar y pasar por él. Si el convenio contuviese algunas condiciones, que exigieran la intervencion judicial, el juez podrá acordar las providencias que correspondan, pues para todo ello le autoriza la ley.

Seria un contrasentido conceder el recurso de apelacion á los que han consentido el convenio, espresa ó tácitamente, y por esta razon, declara el artículo 515 que, «la providencia en que se mande llevar á efecto el convenio, no es apelable por ninguno de los que hayan sido citados personalmente para la junta, y no lo hayan impugnado en los términos prevenidos en el art. 513.» Conviene tener muy presente que esta disposicion no se refiere solo á los que *concurrieron* á la junta; sino á todos los que fueron *citados personalmente* para ella, aunque no hayan concurrido. Ya hemos dicho que unos y otros pueden impugnar el acuerdo de la junta, en el término de ocho dias, por cualquiera de las causas antes indicadas, con tal de que los que concurrieron á ella hubieren disentido y protestado contra el voto de la mayoría: el no haber hecho uso de este derecho en tiempo oportuno, indica su propósito de conformarse con el acuerdo de la mayoría, ó que carecen de motivo legal para impugnarlo, y en tal supuesto ha hecho bien la ley en declarar que los que se encuentran en dicho caso no pueden apelar de la providencia, en que se mande llevar á efecto el convenio.

No se encuentran en el mismo caso los

acreedores que no fueron convocados ó citados personalmente para la junta: la ley debia suponer, como supone, que no han tenido conocimiento de la celebracion de la junta; y como los actos judiciales no perjudican al que no ha sido citado directamente para ellos, segun el propio artículo 515, les queda á salvo su derecho, sin limitacion de tiempo, para impugnar, no la providencia formularia mandando llevar á efecto el convenio; sino el acuerdo de la junta; impugnacion que deberá fundarse tambien en alguna de las causas antes indicadas. Sin embargo, como de esa facultad ilimitada pudieran seguirse perjuicios al deudor, la propia ley le faculta para solicitar que se notifique el acuerdo de la junta concediendo la quita ó espera á los acreedores, que no fueron citados personalmente. Esta notificacion produce el efecto de que sea obligatorio para estos dicho acuerdo, del mismo modo que para los que han sido convocados personalmente y no han reclamado en debida forma, á no ser que protestaren contra él en el acto de la notificacion ó dentro de los cinco dias siguientes. De esta circunstancia, esto es, de que queda obligado al convenio, si no protesta en el acto, ó dentro de cinco dias, debe el escribano enterar al acreedor, al hacerle la notificacion, consignándolo en la diligencia, bajo pena de nulidad (art. 516).

Jurisconsultos respetables opinan que las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, que acabamos de esponer, solo pueden aplicarse á los acreedores escriturarios y comunes, y de ningun modo á los privilegiados é hipotecarios, en razon á que estos no quedan obligados á estar y pasar por lo acordado en la junta; sino en el caso de haber tomado parte en la votacion. Nos parece que esta opinion es contraria á la letra y espíritu de la ley. Sobre no distinguir esta, no hay razon para distinguir. Los artículos 515 y 516 hablan en general de los acreedores, que no fueron citados personalmente: si entre estos se halla alguno con derecho preferente, le bastará, para conservar su derecho, hacer la protesta oportuna en el acto de la notificacion del acuerdo ó en los cinco dias siguientes; si no lo hace, se entiende que se somete voluntariamente al acuerdo de la mayoría, como se somete el que concurre á la junta por el simple hecho de tomar parte en la votacion. Además, el acreedor que no se ha personado en los autos, no ha hecho presentacion del título de su crédito: no consta, por tanto, de un modo fehaciente, si es ó no hipotecario ó privilegiado, y debe ser considerado como acreedor comun mientras él no proteste y reclame su derecho de no someterse al convenio. Por estas consideraciones creemos que son aplicables á toda clase de acreedores las disposiciones antes citadas, sin que por esto sufran menoscabo alguno los derechos de los hipotecarios y privilegiados.

Concluiremos este punto, haciéndonos cargo de una omision, que es de notar en la ley de Enjuiciamiento civil, con relacion á esta materia. Segun el art. 508, han de ser citados individualmente para la junta todos los acreedores, espresados en el estado de deudas, sin escepcion por tanto de los que residan en Ultramar y en el estranjero; pero segun el 507, el término que se señale ha de ser suficiente para que puedan concurrir todos los que residan en la Península. Podrá suceder, por consiguiente, que cuando se haga la citacion de los que se hallen en el estranjero ó en Ultramar, ya se haya celebrado la junta con los residentes en la Península, ó no reste término suficiente para que puedan concurrir. ¿Qué efectos producirá el convenio para tales acreedores? ¿Cuándo podrán impugnarlo, ó protestar para que quede á salvo su derecho preferente, si son hipotecarios? Es un principio de derecho que la citacion, que no se hace con la anticipacion necesaria, es nula y no puede producir efecto: se tendrá, pues, como no hecha, y tal acreedor tendrá siempre á salvo su derecho para impugnar el acuerdo de la junta, conforme al art. 515, considerándolo en iguales condiciones que los que no han sido convocados personalmente: quedará completamente á salvo su derecho, é íntegro contra el deudor, no obstante el convenio, como para caso igual lo dispone el art. 626.

Aprobado definitivamente el acuerdo de la junta otorgando al deudor la quita ó espera, bien por el consentimiento espreso ó tácito de

los interesados, ó bien por la sentencia, que recaiga en el juicio de oposicion, queda terminado el concurso, y se lleva á efecto el convenio, en la forma que en él se haya establecido, ya estrajudicialmente, ya dictando el juez las providencias necesarias para su ejecucion, si alguno de los interesados lo solicita.

SECCION V.

DEL CONCURSO NECESARIO.

Cuando el juicio de concurso es incoado á instancia de uno ó más acreedores, se le dá el nombre de *necesario*, por contraposicion al *voluntario*. Este se promueve voluntariamente por el mismo deudor, como ya se ha dicho; y aquel sin consultarle, y generalmente contra su voluntad y sin su conocimiento, por más que lo tema y espere, atendido el estado de sus negocios. Concurriendo los requisitos que la ley exije, el juez no puede prescindir de declarar al deudor en concurso, aunque este lo contradiga, y de aquí la denominacion de *necesario*, que le ha dado la ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo la antigua jurisprudencia, la cual le daba tambien el nombre de *ocurrencia ó pleito de acreedores*.

Fuera de la indicada diferencia, en cuanto á su orígen, los dos juicios se dirigen á un mismo fin, el pago de los acreedores con los bienes que tenga el deudor comun y hasta donde estos alcancen; y producen idénticos efectos, los que pueden verse en el párrafo 2.° de la seccion II. Tambien se acomodan á un mismo procedimiento, luego que ha recaido la declaracion de concurso. Y como la ley espone este procedimiento al tratar del concurso necesario, siguiendo el mismo sistema, espondremos en la presente seccion todo lo que á él se refiere, hasta verificar la graduacion y pago de los acreedores. Debemos, sin embargo, advertir, como razon de método y para mayor claridad, que la materia de los dos primeros párrafos es propia y peculiar del concurso necesario, así como lo es del voluntario la que hemos espuesto en la seccion III.

§. 1.° *Requisitos para la formacion del concurso necesario.*

Como los efectos de este juicio son de tanta gravedad y trascendencia para el deudor, puesto que se procede al embargo y depósito de todos sus bienes, luego que recae la declaracion del concurso, quedando en su virtud inhabilitado para el manejo y administracion de los mismos, la ley ha adoptado las precauciones necesarias, á fin de impedir que pueda adoptarse esa medida sin una absoluta necesidad; y no la habria, si el deudor tuviera bienes suficientes para cubrir sus compromisos. A dicho fin la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 251, determina taxativamente las circunstancias que deben concurrir para que pueda decretarse la formacion del concurso necesario.

Es la primera que exista instancia de parte legítima, lo cual equivale á decir que ha de haber un acreedor, que justifique este carácter con un título que lleve aparejada ejecucion, y que deduzca su solicitud por escrito, representado por un procurador y bajo la direccion de letrado, porque ambos requisitos han de concurrir siempre en todo juicio contencioso. Pero, como no seria bastante la existencia de un crédito para producir una declaracion tan grave, la ley exige además la justificacion de dos estremos, á cual más importante. Es el primero, que haya dos ó más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor; y el segundo, que no se hayan encontrado en todas, ó en alguna de ellas, bienes, libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame.

Para cumplir el primer estremo, es preciso justificar la existencia de dos ó más juicios ejecutivos contra el mismo deudor, pues de otro modo no habria cuestion sobre la preferencia en el pago, ni nada que embarazara la marcha ordinaria del juicio ejecutivo. De ello se infiere que no basta la existencia de varios litigios contra una misma persona, para que pueda ser declarada en concurso necesario: es preciso que dichos pleitos sean eje-

cutivos (1); que en ellos se haya despachado ya la ejecucion, y que se hallen pendientes, al solicitarse la declaracion del concurso. Sobre este punto no ha sido uniforme la jurisprudencia, ni aun la del Tribunal Supremo; pues existen fallos en uno y otro sentido, acerca de si el juicio ejecutivo se termina con la sentencia de remate, ó si ha de considerarse pendiente durante las diligencias de apremio, que son su complemento. Cualquiera que sea el sentido, en que se resuelva esta cuestion para los efectos de la acumulacion de autos, con cuyo motivo se ha suscitado, la opinion que tenemos por mas conforme á la ley y á los buenos principios, es que la declaracion de concurso necesario podrá hacerse, aunque los juicios ejecutivos estén sentenciados de remate; por que si bien esta circunstancia puede influir en la cuestion indicada de acumulacion de autos, de lo cual nos ocuparemos despues en el párrafo 3.° de esta seccion, no puede impedir la declaracion de concurso, que tiene gran trascendencia, y que puede existir independientemente de los juicios ejecutivos sentenciados de remate. La ley de Enjuiciamiento civil en su art. 521 habla en general de *ejecuciones*, y bajo esta denominacion comprende el tít. 20 de la propia ley los dos períodos del juicio ejecutivo.

El segundo estremo, cuya justificacion exige la ley, es que no se hayan encontrado en todas, ó en alguna de las ejecuciones pendientes, bienes, libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir las cantidades, que se reclamen. Si los hubiere, no habria razon para el concurso, puesto que cada acreedor podria hacer efectivo su crédito sin entrar en cuestion con los demás acerca de la preferencia. Sobre dicho estremo decidirá el criterio judicial, por que la ley no pide una prueba acabada de que los bienes no bastan á cubrir las deudas reclamadas: usa el adverbio *conocidamente*, lo cual indica que será suficiente que el juez forme por sí este juicio en vista de lo que resulte de las diligencias de embargo. Si existiese duda, deberá resolverse siempre en favor del deudor.

Aunque la ley no ha determinado en qué forma ha de hacerse la justificacion, que exige de dichos dos estremos, parece natural que, al deducirse la solicitud de declaracion de concurso necesario, se acompañen los correspondientes testimonios, ó se pida por un otrosí que los libren los escribanos, que actúen en las ejecuciones pendientes, comprensivos del auto despachando la ejecucion, con espresion de la cantidad, objeto de ella, de las diligencias de embargo y del estado de los pleitos, por que así podrá saberse si estos se hallan pendientes, y si ha habido ó no bienes bastantes para los embargos en todos ellos. Cuando todas ó algunas de las ejecuciones pendan en el mismo juzgado, deberá pedirse, en lugar de los testimonios, que el juez las llame á la vista para resolver, y que acuerde su acumulacion al hacer la declaracion del concurso. Tambien podrá presentarse cualquier otro documento, que conduzca á dicho fin, como certificacion del registro de la propiedad, espresiva de los inmuebles que posea el deudor y de las responsabilidades que sobre ellos pesen. Por regla general, sobre este punto se está á lo que resulta de las diligencias de embargo, y no hay necesidad de una justificacion cumplida, porque no la exije la ley, como ya se ha dicho, y porque el deudor tiene espedito su derecho para oponerse, y para reclamar la indemnizacion de daños y perjuicios, si se hubiese procedido con dolo ó falsedad.

En resúmen, es parte legítima para pedir la formacion de concurso necesario, cualquier acreedor, á cuya instancia se haya despachado ejecucion contra el deudor, ó que acredite su derecho con un título ejecutivo de los espresados en el art. 941 de la ley de Enjuiciamiento civil; y para que pueda decretarse, es preciso se justifique además que hay dos ó más ejecuciones pendientes contra el mismo deudor, y que en alguna de ellas no se han encontrado para el embargo bienes, libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes para cubrir la cantidad que se reclame. Concurriendo todas estas circunstan-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Just., en competencia, de 12 de Mayo de 1862.

cias, el juez, sin dar audiencia al deudor, debe declararlo en concurso necesario, y acordar las demás providencias, que se espondrán en el párrafo 3.° y en los siguientes. El deudor, á quien debe notificarse dicha declaracion, puede oponerse á ella, en el término y por los trámites que se mencionarán en el párrafo 4.° Y si el auto fuere denegatorio de la declaracion de concurso, podrá apelar de él, en ambos efectos, dentro de cinco dias, la parte que hubiere promovido el juicio.

§. 2.° *Juez competente.*

Despues de establecer la ley de Enjuiciamiento civil los requisitos indispensables para que pueda decretarse la formacion del concurso necesario, pasa á determinar quién sea el juez competente para conocer de este juicio y de sus incidencias. Siguiendo el mismo metodo vamos á esponer aquí lo que se halla dispuesto sobre este punto.

Declara dicha ley en el artículo 522, que cualquiera de los jueces que estén conociendo de las ejecuciones, es competente para declarar el concurso; pero que, si alguno de ellos fuere el del domicilio del deudor, y éste, ó el mayor número de los acreedores lo reclamasen, deberán remitírsele los autos para la continuacion del juicio, con preferencia á los demás jueces. Esta misma disposicion ha sido reproducida en la regla 19 del art. 309 de la ley provisional, sobre organizacion del poder judicial, de 15 de Setiembre de 1870, añadiendo para el caso de competencia entre jueces, en cuyo distrito no esté domiciliado el deudor, que corresponderá el conocimiento al que antes hubiere decretado el concurso.

Estas son las reglas de competencia, que hoy rigen para los concursos necesarios; pues respecto de los voluntarios, ya hemos dicho que el juez del domicilio del deudor es el único competente. Segun dichas reglas, cualquiera de los jueces que estén conociendo de una ó más ejecuciones entabladas contra el deudor, es competente para decretar y seguir el concurso necesario contra el mismo. Esta es la regla general, fundada en que el juez que, por sumision espresa ó tácita de las partes, ó por disposicion de la ley, está conociendo legítimamente de un juicio ejecutivo, tambien debe ser competente para conocer de la consecuencia de ese juicio, que es el concurso. Pero puede suceder que las ejecuciones se hayan entablado en diferentes juzgados, y que en dos ó más de ellos se haya prevenido á la vez el juicio de concurso necesario, por que cada acreedor lo haya pedido por separado ante el juez, que conoce de su ejecucion. Como realmente todos tienen competencia, para dirimir el conflicto, la ley dá reglas precisas y concretas, de acuerdo con la antigua jurisprudencia. Dispone para este caso, que sea preferido á todos el juez del domicilio del deudor, siempre que éste, ó el mayor número de los acreedores, lo reclamasen (1); y no concurriendo esta circunstancia, que tenga la preferencia el juez que ántes hubiere decretado el concurso. No ha previsto la ley el caso posible de que en ambos juzgados contendientes se haya decretado el concurso en un mismo dia: en tal caso, siguiendo el espíritu de la propia ley, habrá de atenderse á la prioridad de la solicitud para la formacion del concurso; y si ambas se hubiesen presentado tambien en una misma fecha, á la del juicio ejecutivo, dándose la preferencia al más antiguo.

Téngase presente que, segun se deduce de las palabras mismas de las dos leyes, antes citadas, para que el juez del domicilio del deudor pueda reclamar la preferencia, es requisito indispensable que esté conociendo de alguna de las ejecuciones, pues de otro modo carecerá de jurisdiccion, por haberse sometido el deudor á otro juez. Concurriendo dicha circunstancia de hallarse pendiente en su juzgado alguna de las ejecuciones, podrá el juez del domicilio del deudor, aunque no se haya decretado en su juzgado la formacion del concurso, reclamar los autos del que lo haya

(1) Si el deudor no reclama el fuero de su domicilio, queda sometido al juez que conozca del concurso. Sobre esta materia, y en confirmacion de la doctrina espuesta, pueden verse las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en competencias, de 15 de Enero y 8 de Octubre de 1859; en casacion, de 23 de Diciembre del mismo año, y otras.

decretado, para la continuacion del juicio, siempre que así lo solicite el deudor, antes de someterse al otro juez, ó que lo reclamen el mayor número de los acreedores. De suerte que, aunque aquel ó estos lo soliciten, si no hay ejecucion pendiente en su juzgado, no podrá el juez del domicilio reclamar el conocimiento preferente, que en este caso le concede la ley; pero habiéndola, tendrá esta preferencia para la continuacion del juicio, aunque él no haya decretado la declaracion del concurso; á diferencia de los otros jueces, que no pueden provocar ni sostener la competencia, sino en el caso de haber hecho préviamente, cada uno en su juzgado, dicha declaracion, á instancia de parte legítima. No creemos pueda darse otra inteligencia á las dos disposiciones antes citadas, sujetándose á lo que dicen literalmente, á pesar de que seria lo mas conveniente, en nuestro concepto, dar en todo caso la preferencia al juez del domicilio del deudor, siempre que éste reclamase su fuero.

Puede suceder que un mismo deudor sea declarado en concurso voluntario á su instancia en el juzgado de su domicilio; y á la vez en concurso necesario en otro juzgado, á instancia de los acreedores. ¿Cuál de los dos juicios deberá prevalecer en tal caso? ¿Quién será el juez competente para conocer de ellos? La primera cuestion no tiene en el dia otra importancia que la relativa á la competencia, ó lugar en que haya de seguirse el juicio, puesto que uno y otro concurso están sujetos á un mismo procedimiento y producen iguales efectos. Deberá, por tanto, prevalecer el juicio, en que primero se haya hecho la declaracion del concurso; y si fué en un mismo dia, el incoado con anterioridad. Si prevalece el del concurso voluntario, el juez del domicilio del deudor será el único competente; y si prevalece el del necesario, entonces la competencia se resolverá por las reglas antes espuestas, sin que pueda alegar preferencia el juez del domicilio, á no ser que esté conociendo de alguna de las ejecuciones. No es igual el caso, en que un mismo deudor sea declarado, á la vez, en concurso voluntario y en quiebra: en tal supuesto debe prevalecer el juicio de quiebra, pues el deudor no puede perjudicar, con el hecho de presentarse en concurso voluntario, los derechos que corresponden á sus acreedores por obligaciones mercantiles (1).

El juez competente para conocer del concurso, lo es tambien para todas las incidencias que en él ocurran, hasta que quede ejecutada la sentencia ó terminado el juicio con la distribucion de los bienes entre los acreedores. Esto es conforme á una regla general siempre reconocida, y ahora sancionada espresamente por el art. 302 de la ley citada de organizacion del poder judicial. Tambien es competente para conocer de todas las reclamaciones sobre responsabilidad pecuniaria, á que estén afectos los bienes del concurso; del exámen y liquidacion de cuentas, y de cuantas medidas se refieran á dichos bienes y su conservacion (2); como asimismo de todos los pleitos que deban acumularse al de concurso, segun se espondrá en el párrafo siguiente. Pero no le corresponde conocer de los pleitos que se entablen contra un tercero por accion real, ó para compelerle al cumplimiento de una obligacion contraida á favor del concurso ó de su causante: en tales casos ha de seguirse el fuero del demandado, ó de cosa sita, segun proceda, teniendo los síndicos ó la representacion del concurso que acudir como demandantes ante el juez competente para el demandado (3).

§. 3.° *Pleitos acumulables al de concurso.*

El art. 523 de la ley de Enjuiciamiento civil dice testualmente, que «declarado el concurso, se notificará al deudor y se oficiará

(1) Sentencia del Trib. Sup. de Just., en competencia, de 25 de Octubre de 1862.

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en competencia, de 21 de Febrero de 1861 y 13 de Noviembre de 1862. El último considerando de la primera dice así: «Considerando que el juicio de concurso, como universal, atrae, conforme á la ley de Enjuiciamiento civil, todas las reclamaciones sobre responsabilidad pecuniaria, á que están afectos los bienes del concurso, siendo el juez del mismo competente para disponer y acordar, relativamente á ellos, lo que proceda.»

(3) Id., en id., de 20 de Diciembre de 1859, y de 24 de Noviembre de 1865.

á los jueces que conozcan de los demás pleitos ejecutivos, á fin de que los remitan para su acumulacion al juicio universal.» De esta regla general y de la consignada en el artículo 157 de la propia ley, que determina las causas por que debe decretarse la acumulacion de autos, siendo la 3.ª «cuando haya un juicio de concurso, al que se halle sujeto el caudal contra que *se haya deducido ó deduzca cualquier demanda*,» parece debia inferirse, y sentarse, como doctrina legal, que procede la acumulacion al juicio de concurso, no solo de los pleitos ejecutivos pendientes, cualquiera que sea su estado, aunque se hallen en la vía de apremio, puesto que, segun el art. 139, tambien de aplicacion general, «la acumulacion puede pedirse en cualquier estado del juicio;» sino tambien la de todos los pleitos ordinarios pendientes, ó que se deduzcan contra el caudal concursado, y hasta las diligencias de apremio ó de ejecucion de sentencia para la exaccion de cualquiera cantidad, á cuyo pago haya sido condenado el deudor comun.

Apoyaba esta interpretacion de las disposiciones citadas, la circunstancia de que esa era la jurisprudencia que venia en observancia, y que habia sancionado tambien el Tribunal Supremo de Justicia, en la decision de competencias anteriores á la ley de Enjuiciamiento civil (1), reconociendo que el juicio de concurso de acreedores, como universal, producia el efecto, luego que mediaba la declaracion de estar bien formado el concurso, *de atraer á sí todas las reclamaciones judiciales pendientes contra el concursado*. Y esto se fundaba en que, de otro modo, no es posible graduar, en una misma sentencia, el lugar que cada demanda haya de ocupar para su satisfaccion, ó sea el órden en que han de ser pagados los acreedores, segun su derecho respectivo, cuando no hay bienes bastantes para satisfacer á todos, que es el objeto y fin de dicho juicio. «La acumulacion de las ejecuciones pendientes, se dijo tambien en la *Esposicion de motivos* de la citada ley, publicada por Gomez de la Serna, como individuo de la Comision, que la redactó (pág. 119), *es de absoluta necesidad*; de otro modo no seria universal el juicio de concurso, y no se conseguiria su principal objeto, á saber, que entre todos los acreedores se guarde la preferencia que corresponde á sus créditos respectivos.»

Y tambien se citaba en apoyo de dicha interpretacion, como razon de analogía, y por la regla de derecho «*ubi eadem est ratio, eadem esse debet juris dispositio*,» la disposicion de los arts. 380 al 383 de la propia ley de Enjuiciamiento, los cuales ordenan para el juicio de ab-intestato, igualmente universal, que el juez del ab-intestato es el *único* competente para conocer de las demandas, que se deduzcan contra los herederos del difunto ó sus bienes, despues de prevenido dicho juicio; de todas las ejecutivas ú ordinarias por accion personal, pendientes en primera instancia contra el difunto, y de las en que se hubiere ejercitado una accion real; á no ser que se siguieran en el lugar de la cosa, disponiendo espresamente que todos estos pleitos se acumulen al universal. Si así lo previene la ley para el juicio de ab-intestato, sólo por ser universal, pues ningun inconveniente invencible podia resultar de seguirse por separado esos pleitos, con mayor razon debia entenderse para el de concurso, en el que hay necesidad de reunir todas las reclamaciones contra el caudal concursado, para graduarlas en una misma sentencia.

Pero á pesar de tan justificadas razones, y no obstante los precedentes indicados, empezó por divagar la jurisprudencia, y ha concluido por fijarse en el sentido contrario á los antecedentes espuestos.

Al decidir una competencia entre el tribunal de comercio de Santander y el juez de primera instancia de Palencia, por sentencia de 20 de Diciembre de 1859, el Tribunal Supremo de Justicia consignó en el primer considerando que «el concurso necesario de acreedores *solo* hace indispensable, segun el artículo 523 de la ley de Enjuiciamiento ci-

(1) Sentencias de 13 de Diciembre de 1853 y 27 de Mayo de 1854. La propia doctrina se sentó en otra sentencia posterior á la ley de Enjuiciamiento civil; en la de 21 de Febrero de 1861, citada en el párrafo anterior.

vil, la acumulacion de los pleitos ejecutivos pendientes contra el concursado en otros juzgados;» y aunque esto se dijo para demostrar que no eran acumulables á dicho juicio las demandas entabladas por los síndicos del concurso contra un tercero, pues no estaban esceptuados de la observancia de las reglas de competencia, y que, por lo tanto, como demandantes, debian acudir al fuero del demandado, se dedujo por algunos, sin embargo, la consecuencia, como si esa fuese la única regla aplicable, de que los pleitos que no fuesen ejecutivos, no eran acumulables al de concurso, puesto que, segun dicha declaracion, *solo* lo eran los ejecutivos pendientes.

Y todavia, concretándose á los ejecutivos, ha sido mayor y más lamentable la vacilacion. El Tribunal Supremo ha declarado con repeticion, de acuerdo en este punto con la ley, que las cuestiones de acumulacion de autos, lo mismo que las de competencia, no pueden tener lugar en *juicios terminados*. Para la aplicacion de esta regla era preciso fijar, cuando ó en que estado quedaba terminado el juicio ejecutivo. El propio Tribunal Supremo habia declarado (1) «que el juicio ejecutivo no se ultima por la sentencia de remate; sino que le son inherentes los trámites sucesivos hasta realizarse el pago, los cuales forman su complemento;» pero casi á la vez sentó tambien la doctrina de que el juicio ejecutivo, para los efectos de la acumulacion y de la competencia, queda terminado por la sentencia de remate, consentida ó pasada en autoridad de cosa juzgada, y que las actuaciones posteriores no tienen otro concepto que el de diligencias necesarias para el cumplimiento de una sentencia ejecutoria (2).

Ciertamente la diversidad de los casos dió lugar á la diversidad de las resoluciones, y no puede suponerse otra cosa, atendida la ilustracion del alto Tribunal, encargado de uniformar la jurisprudencia; pero es un hecho que la contradiccion, aparente ó real, existia, y como consecuencia de ella la falta de unidad de la jurisprudencia sobre el punto de que tratamos, no solo en los juzgados inferiores; sino tambien en las Audiencias, y hasta entre las diferentes Salas de un mismo tribunal superior. Unos tribunales daban lugar á la acumulacion al juicio de concurso de los pleitos ejecutivos, en cualquier estado, aunque se hallasen en la via de apremio, siempre que no se hubiese hecho pago al acreedor; y otros la denegaban en idénticas circunstancias, fundándose en que el juicio ejecutivo quedaba terminado con la sentencia de remate. Y unos y otros fallos han quedado firmes, á pesar de haberse interpuesto recurso de casacion, por haberse declarado inadmisible este recurso, mediante á que tales sentencias, en uno y otro caso, no ponen término al juicio, ni hacen imposible su continuacion (1).

Despues de tantas vacilaciones, ha prevalecido por último la jurisprudencia de que, para que proceda la acumulacion de los juicios ejecutivos al de concurso, sea voluntario ó necesario, es indispensable que, al hacerse la declaracion de este, no haya recaido en aquellos sentencia de remate, que haya causado ejecutoria; pues si esta sentencia causó ejecutoria, se tiene por terminado el juicio ejecutivo, y la acumulacion que ordena el artículo 523 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de entenderse solo de los juicios pendientes (2).

(1) Sentencia, en casacion, de 24 de Diciembre de 1861. (*Colec. leg. núm.* 313.)

(2) Sentencias, en competencias, de 11 de Setiembre de 1861, 14 de Junio de 1866, y otras.

(1) En confirmacion de lo espuesto, pueden verse, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Setiembre y 11 de Octubre de 1866 (*núms.* 37 *y* 61 *de la Colec. legislativa*). Citamos estas con preferencia, por la circunstancia de haberse dictado casi simultáneamente por una misma Sala.

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en competencias, de 25 de Setiembre y 9 de Noviembre de 1869, y 17 de Diciembre de 1870. En las dos primeras se declaró no haber lugar á la acumulacion, porque cuando se decretó el concurso, ya estaban consentidas las sentencias de remate; y se accedió á ella en la última, porque, aun cuando la sentencia de remate se habia dictado antes de la declaracion del concurso, se notificó despues, y por lo tanto, no era ejecutoria. Los considerandos de esta última sentencia dicen así:

«Considerando, que para que tenga lugar lo dispuesto en los arts. 519 y 523 de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre acumulacion de juicios ejecutivos á un concurso, sea voluntario ó necesa-

Esta era la regla que venia ya observándose generalmente, cuando en 13 de Setiembre de 1870 se publicó la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, que contiene tambien disposiciones sobre esta materia. En la regla 20 del art. 309, despues de ordenar en sus dos primeros párrafos, que en la acumulacion de autos correspondientes á diferentes juzgados ó tribunales, *cuando proceda segun las leyes*, será competente el que conociere de los más antiguos, esceptuándose los de testamentaría, ab-intestato, concurso de acreedores y quiebras, ó sea los juicios universales, en los cuales la acumulacion se hará siempre á ellos, lo propio que ya estaba mandado, añade: «Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren en diferentes instancias, y en los conclusos para sentencia, los cuales no serán acumulados.»

Esta última declaracion, única novedad que se introduce, tiene sin duda por objeto establecer una regla fija sobre el punto á que se refiere, y acerca del cual tampoco era uniforme la jurisprudencia; pero viene á producir una nueva perturbacion en la materia de que tratamos. Reconocemos la conveniencia de esa declaracion para las acumulaciones, en general; mas no para las que han de tener lugar en los juicios universales y especialmente en los concursos. Ya se habia fijado, como se ha dicho, la inteligencia del art. 523 de la ley de Enjuiciamiento civil en el sentido de que los pleitos ejecutivos, que han de acumularse al juicio de concurso, son solamente aquellos, en que no hubiese causado ejecutoria la sentencia de remate. Si esta limitacion producia el grave inconveniente de hacer imposible la graduacion de todos los créditos en una misma sentencia, tal inconveniente se agrava con la nueva limitacion, que ahora se establece, la cual hace estensiva la esclusion á todos los que se hallen en segunda instancia, y á los que, estando en la primera, se hallen conclusos para sentencia, en cuyo estado habrán de considerarse, luego que el juez mande traer los autos á la vista para pronunciar la sentencia de remate, esto es, luego que dicte las providencias, que para sus respectivos casos ordenan los arts. 961 y última parte del 968 de la citada ley de Enjuiciamiento.

Creemos que era mas conveniente la antigua jurisprudencia, reseñada al principio, y que con estas innovaciones ha perdido mucho la pronta y recta administracion de justicia. El acreedor comun, que enterado del estado del deudor, acaso por este mismo y de acuerdo con él, entable su ejecucion, y consiga llegar á la sentencia de remate, sin que se aperciban los demás acreedores, cosa tan fácil en un juicio tan breve, adquiere el privilegio de no ser llevado al concurso, con perjuicio de los demás acreedores. Podrán los que de estos se crean con igual ó mejor derecho, entablar la correspondiente tercería, que es el medio que se ha adoptado en la práctica; pero las tercerías han de sustanciarse en vía ordinaria: son por tanto costosas y de larga duracion; y de todos modos queda defraudado el objeto económico y de justicia de los juicios universales, de atraer al concurso todas las reclamaciones, que se dirijian contra el caudal concursado, para graduarlas y pagarlas por el órden que en derecho corresponda; que es lo que en último término viene á resolverse en la tercería, pero por trámites mas largos y costosos. No implica, ni puede servir de obstáculo, el que haya recaido una sentencia firme, pues la acumulacion, en tal caso, no seria para resolver sobre la legitimidad del crédito; sino, respetando la ejecutoria, para graduarlo y pagarlo en el lugar correspondiente, lo cual no contraría la cosa juzgada, como lo tiene declarado el propio Tribunal Su-

---

rio, es indispensable que en ellos no haya recaido sentencia de remate, consentida por el deudor, ó contra la cual no hubiere éste promovido recurso alguno, cuya doctrina es conforme á la establecida por este Supremo Tribunal en repetidas sentencias:

»Considerando, que en el presente caso, si bien fué pronunciada sentencia de remate por el juez de Valladolid en 26 de Octubre, no fué notificada al deudor hasta el 12 de Noviembre, tiempo posterior al concurso; pues habia sido éste declarado en 2 del mismo mes, y aquel manifestó en el acto de la notificacion que el concurso se hallaba pendiente en el juzgado de Cuéllar, desde la indicada fecha.»

premo, en un recurso de casacion de Ultramar (1). A pesar de tan fundadas consideraciones, la ley ha creido conveniente otra cosa, y á ella tienen que sujetarse los litigantes y los tribunales.

Otra escepcion, mas justificada que las anteriores, puesto que tiene por objeto facilitar el crédito territorial, haciendo mas espedita y eficaz la preferencia que tiene la hipoteca, ha sido introducida por la ley Hipotecaria, reformada en 1869, y que ha principiado á regir en 1.° de Enero del corriente año 1871, segun decreto de 29 de Octubre de 1870. El artículo 133 de esta ley, que es uno de los reformados, despues de consignar que al vencimiento del plazo para el pago de la deuda, el acreedor hipotecario podrá pedir que se despache mandamiento de ejecucion contra todos los bienes hipotecados, estén ó nó en poder de terceros poseedores, y de establecer reglas para el procedimiento con estos y con el deudor, añade: «No se suspenderá *en ningun caso* el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor, ó del tercer poseedor, ni por la declaracion de quiebra, *ni por el concurso de acreedores* de cualquiera de ellos.» Ya antes se habia comprendido una disposicion análoga en el decreto de 5 de Febrero de 1869, sobre instituciones de crédito territorial. En virtud de ella, pues, el acreedor hipotecario puede seguir sus procedimientos ejecutivos con independencia del concurso, siempre que se limite á perseguir la hipoteca, y no procederá por tanto la acumulacion.

Resulta, pues, de lo espuesto que, segun las disposiciones hoy vigentes y la jurisprudencia establecida, son acumulables al de concurso todos los *juicios ejecutivos*, pendientes en primera instancia contra el mismo deudor, al hacerse la declaracion del concurso, siempre que no se hallen conclusos para dictar sentencia de remate, la cual pone término á estos juicios, pues, estando conclusos para sentencia, ya no pueden acumularse. Se esceptúan de dicha regla los promovidos por los acreedores hipotecarios, cuando el embargo se haya limitado ó se limite á la finca ó fincas especialmente hipotecadas: en este caso ha de seguirse el procedimiento ejecutivo en el juzgado que corresponda, con independencia del concurso, hasta vender los bienes y hacer pago al acreedor, poniendo despues á disposicion del juez del concurso el sobrante, si lo hubiere.

En cuanto á *pleitos ordinarios*, no se ha hecho otra novedad que la declaracion, anteriormente indicada, de que se hallen pendientes en primera instancia, pero sin estar conclusos para sentencia. De consiguiente, todos los que, reuniendo estas circunstancias, tengan por objeto cualquiera reclamacion, que afecte á los bienes concursados, ya se hayan incoado contra el deudor antes de la declaracion del concurso, ya se promuevan despues, son acumulables al juicio de concurso (1). La ley citada de organizacion judicial dice que no serán acumulados *los autos, que estuvieren en diferentes instancias*, ni los conclusos para sentencia. Como la acumulacion ha de acordarse á la vez que la declaracion del concurso, y por consiguiente en la primera instancia, por esto hemos dicho que solo son acumulables los pleitos no conclusos, pendientes en la misma primera instancia; pero si se interpusiese apelacion del auto sobre la declaracion de concurso, por haber sido denegada, ó por oposicion del deudor, y con

(1) Sentencia de 19 de Enero de 1861.

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en competencias, de 21 de Febrero de 1861, 7 de Junio de 1867, 21 de Octubre de 1870, y otras. En la segunda de estas sentencias se establece la doctrina siguiente:

«Considerando, que el juez que conoce de un concurso de acreedores legalmente formado, es el único competente para conocer, no sólo de los autos principiados ante otros jueces con anterioridad á su formacion, sino tambien de los que despues se instauren con relacion á los bienes del concursado:

»Considerando, que esta doctrina se halla consignada en la causa tercera del art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil, al prescribir que, cuando haya un juicio de concurso, al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya deducido ó deduzca cualquier demanda, se deben acumular los autos, y que ha de verificarse siempre al del juicio universal, como lo previene el 163 de la misma ley.»

este motivo pasasen los autos del concurso á la segunda, creemos que en ella podrá pedirse la acumulacion de los pleitos, que se hallen tambien en apelacion, siempre que no estén conclusos para sentencia. A esto autoriza la letra de la ley.

Respecto de *diligencias de apremio*, no son acumulables al juicio de concurso, no solo las de la vía de apremio en el juicio ejecutivo, como ya se ha indicado; sino tampoco las que tengan por objeto la ejecucion de una sentencia, dictada en juicio ordinario, arbitral ó de otra clase, en razon á tratarse de un pleito terminado (1); pero si tales procedimientos tienen por objeto la exaccion de derechos procesales, como en tal caso no ha habido juicio anterior, que pueda considerarse terminado, deben acumularse al de concurso para su graduacion en el lugar que corresponda (2).

Y tampoco son acumulables los actos de jurisdiccion voluntaria, porque tienen sus trámites especiales, y no son de los pleitos ejecutivos, comprendidos en el art. 523 de la ley de Enjuiciamiento civil (3); y lo propio habrá de entenderse de los interdictos y demás juicios que tienen su tramitacion y objeto especial; ni los pleitos, que la representacion del concurso tenga que seguir, como demandante contra terceras personas, segun ya se ha dicho; ni los demás juicios en que tenga interés el concursado, si no son incidentes del mismo concurso (4).

Concluiremos esta materia, indicando que, segun se deduce del citado art. 523, debe decretarse la acumulacion en la misma providencia ó auto, en que se haga la declaracion del concurso. Para que aquella tenga efecto, el juez, que de este conozca, debe dirijir oficios ó exhortos á los jueces que estén conociendo de los pleitos ejecutivos y demás pendientes, á fin de que se los remitan para su acumulacion al de concurso. Si alguno de estos se negase, debe sustanciarse y dirimirse la contienda, como las cuestiones de competencia. No obsta lo dicho para que, si durante el juicio de concurso, se tuviese noticia de que se halla pendiente ó se ha promovido en otro juzgado algun pleito, de los que deben acumularse, se reclame en la forma antes indicada. La acumulacion de los pleitos pendientes en el mismo juzgado del concurso, se verifica, mandando el juez á los escribanos, que en ellos actúan, que los pasen al del concurso, para que los una al mismo y dé cuenta de todos.

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en competencias, de 20 de Octubre de 1862 y 6 de Setiembre de 1864.
(2) Id. en id. de 12 de Mayo de 1862 y 20 de Agosto de 1868.
(3) Id. en id. de 31 de Diciembre de 1861.
(4) Id. en id. de 21 de Febrero de 1860.

§. 4.° *Oposicion del deudor.*

Despues de ordenar la ley de Enjuiciamiento civil (art. 523) que «declarado el concurso, se notificará al deudor,» en el 531 determina el objeto de esta notificacion, disponiendo que «el deudor puede oponerse á la declaracion del concurso, dentro de los tres dias siguientes al en que le haya sido notificada; y pasados los tres dias sin oponerse, se estimará consentida la declaracion.» Adoptado el sistema, para protejer los intereses de los acreedores, de dictar la declaracion del concurso necesario sin citacion ni audiencia del deudor, como debe hacerse, segun hemos espuesto en el párrafo 1.° de esta seccion, no podian negarse al propio deudor, sin atacar el sagrado derecho de la defensa, los medios necesarios para impugnar esa providencia, que no solo le afecta en sus intereses; sino tambien en su honra y reputacion. Es verdad que tiene ya una garantía en los requisitos que la ley exije, como indispensables para prevenir el juicio; pero puede haberse procedido con error, dolo ó falsedad, y es de justicia la defensa del que se crea agraviado por una providencia de efectos tan trascendentales, dictada sin haberle oido.

Puede suceder que la oposicion sea infundada y sin otro objeto que el de procurar dilaciones al juicio de concurso. El peligro de este abuso no era bastante para negar la defensa; pero como de él pudieran seguirse perjuicios á los acreedores, si el deudor tuviera

á la vez la posibilidad de distraer los bienes, la ley ha procedido con prevision, ordenando para evitarlo (art. 533), que «mientras se sustancia y decide la oposicion, continuarán ejecutándose las medidas adoptadas para el embargo y depósito de los bienes, ocupacion de libros y papeles, retencion y exámen de la correspondencia.» De suerte que la oposicion del deudor no impide la ejecucion de las medidas necesarias, que espondremos en el párrafo que sigue, para poner en seguridad todos los bienes, evitando ocultaciones y fraudes, y salvar así los intereses de los acreedores. A este fin deberá formarse pieza separada, con testimonio de las actuaciones conducentes, para que la sustanciacion de la oposicion no embarace la ejecucion de dichas medidas, que han de llevarse á efecto en todo caso.

En la práctica, *oponerse* no es lo mismo que *formalizar la oposicion*. Se hace lo primero por medio de un simple escrito, espresando la parte interesada que no está conforme con el acto ó providencia de que se trate, y pidiendo se la tenga por opuesta; y *se formaliza la oposicion* en otro escrito razonado, numerando los hechos y los fundamentos de derecho, como debe hacerse en toda demanda. Algunas veces se hacen las dos cosas en un mismo escrito; pero por regla general se hacen en escritos separados, y así lo autoriza la ley espresamente en el juicio ejecutivo y en otros. Respecto de la oposicion, de que tratamos, á la declaracion del concurso, parece que la ley distingue tambien esos dos trámites, pues en el art. 531 dice, como ya hemos visto, que el *deudor puede oponerse*, y en el 532 determina lo que ha de hacerse *si el deudor formalizare oposicion*; pero sin señalar término para este segundo trámite. De aquí la duda en la práctica, de si será preciso formalizar la oposicion dentro de los tres dias que, con carácter de improrogables, concede la ley para oponerse; ó si serán permitidos los dos trámites antes indicados, cumpliendo el deudor, para el uso de su derecho, con presentar dentro de los tres dias el escrito anunciando su oposicion.

Es una regla de derecho, fundada en la equidad, que cuando la ley dá lugar á dudas, como en el caso presente, debe seguirse la opinion que sea más favorable á la defensa del reo ó demandado, ó lo que para casos análogos haya dispuesto la propia ley. Por una y otra razon nuestra opinion es, que debe estimarse como interpuesta en tiempo oportuno la oposicion del deudor, siempre que dentro de los tres dias presente el escrito oponiéndose: no exige tampoco más el art. 531, antes citado. Si en el mismo escrito formaliza la oposicion, se dará traslado al acreedor, á cuya instancia se hubiere formado el concurso, sustanciándola en la forma que luego espondremos; pero si se limita á la simple oposicion, pidiendo se le tenga por opuesto y se le comuniquen los autos para formalizarla, así deberá acordarse (1), mandando á la vez en uno y otro caso, que ante todo se forme la pieza separada para continuar las medidas relativas á los bienes, que antes hemos indicado. Y no puede ser de otro modo, si se ha de proceder con conocimiento de causa: aunque sea motivada la providencia de declaracion de concurso, las más de las veces no podrá formalizarse la oposicion sin ver lo que resulta de autos. En tal caso, estos no podrán comunicarse más que por tres dias improrogables, que es el término que concede el artículo 534 para todo traslado en estos incidentes.

Aunque la ley no determina espresamente las causas en que pueda fundarse la oposicion del deudor, se deduce naturalmente de sus disposiciones, que no pueden ser otras que las que se refieran á la falta ó inexistencia de los requisitos, que hemos espuesto en el párrafo 1.° de esta seccion, exigidos por el art. 521 como indispensables para la formacion y declaracion del concurso. De consiguiente, podrá fundarse dicha oposicion en cualquiera de las causas siguientes:

1.° En la falta de personalidad del acreedor, á cuya instancia se haya formado el

(1) En confirmacion de esta doctrina, véase la nota 1.ª del §. 3.°, sec. IV de este artículo (página 427), y la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Enero de 1870, á que la misma se refiere. Aunque no son iguales los casos, son análogos, y deben regirse por la misma regla.

concurso, ó en la de su procurador, bien porque no se halle aquel en el pleno ejercicio de los derechos civiles, ó porque no haya justificado su crédito con un título ejecutivo; ó bien porque no hayan acreditado debidamente el uno ó el otro su personalidad, ó el derecho del acreedor á ser parte legítima en el juicio.

2.° En que no existen dos ejecuciones, por lo menos, pendientes contra el mismo deudor.

3.° En que, á pesar de haber dos ó más ejecuciones pendientes, tiene el deudor bienes, libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes para cubrir las cantidades que se le reclamen.

Tambien podrá utilizar el deudor las escepciones de incompetencia y de litispendencia; esta última cuando se haya incoado el mismo juicio anteriormente en otro juzgado competente. Respecto de aquella debemos advertir que, como el demandado queda sometido tácitamente al juez, que ha tomado conocimiento del negocio, por cualquiera gestion que no sea la de proponer en forma la declinatoria, para salvar este inconveniente, deberá el deudor proponerla en el mismo escrito de oposicion, que ha de presentar dentro de los tres dias. Lo mas conveniente en estos casos será promover la cuestion de compentencia, por medio de la inhibitoria, pues de este modo el juez que haya declarado el concurso, tendrá que suspender todo procedimiento, luego que reciba el oficio, requiriéndole de inhibicion.

Si el deudor deja trascurrir los tres dias improrogables, que para ello le concede la ley, sin oponerse, ya no puede ser oido, mediante á que por ministerio de la ley se estima consentida, y pasada por tanto en autoridad de cosa juzgada, la declaracion del concurso. Pero si se opone dentro de dicho término, ha de sustanciarse el incidente, aun cuando la causa alegada no sea ninguna de las indicadas anteriormente: esto pertenece al fondo de la cuestion, y será motivo para desestimar la oposicion en definitiva, mas no para dejar de sustanciarla.

La oposicion del deudor ha de sustanciarse en via ordinaria con el acreedor ó acreedores, á cuya instancia se haya hecho la declaracion de concurso, haciendo aquel las veces de actor en ese incidente, y este ó estos las de demandados. De consiguiente, del escrito en que aquel formalice su oposicion debe darse traslado solamente á dicho acreedor ó acreedores. Pero esto no impide que los demás acreedores, con conocimiento estrajudicial del asunto, pues no ha llegado el caso todavía de que sean citados, se personen en los autos, si les conviene, bien para sostener la declaracion del concurso, ó ya para oponerse á ella: siendo, como son, interesados, no puede rechazarse su intervencion. Previendo el caso la ley de Enjuiciamiento civil, ha dispuesto en el art. 532, que «unidos al deudor bajo una misma direccion, y representados por el mismo procurador, litigarán los acreedores que se opusieren, como él, á la formacion del concurso;» y que «en los propios términos litigarán, unidos al acreedor ó acreedores, á cuya instancia se haya hecho la declaracion, los demás que quieran sostenerla.» De este modo, aunque sean muchos los interesados, no figuran en el juicio más que dos partes, simplificándose así los procedimientos, y evitándose dilaciones y gastos.

Para llenar estos fines, y amparar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los derechos del deudor, no se ha limitado la ley á dichas disposiciones, y á la indicada anteriormente, de que, mientras se sustancia la oposicion, continuarán ejecutándose las medidas relativas al embargo y seguridad de los bienes; sino que ha reducido además todo lo posible los plazos y términos del juicio, á fin de que pueda decidirse en breve tiempo la oposicion; pero sin suprimir ninguno de los trámites del juicio ordinario para que sea ámplio el debate y no queden coartados los medios legítimos de defensa. Con tal objeto se dispone en el art. 534, que «la sustanciacion de la oposicion á la declaracion de concurso se acomodará á los trámites, establecidos para el juicio ordinario, con las siguientes modificaciones:»

1.° «Los traslados serán por tres dias improrogables;» lo cual se refiere á la contestacion, réplica y dúplica, que naturalmente han

de existir en este juicio, puesto que no ha sido suprimido ninguno de estos escritos, los cuales deberán formularse como está prevenido para el juicio ordinario.

2.ª «Solo habrá prueba por conformidad de los interesados, ó en su defecto cuando el juez lo considere necesario.» En virtud de esta facultad el juez no deberá denegar la que solicite alguna de las partes, sino cuando sea notoriamente impertinente.

3.ª «El término de prueba será de diez dias improrogables;» lo cual no imposibilitará su suspension, como en el juicio ordinario, si existiese una justa causa á juicio del juez y bajo su responsabilidad.

4.ª «Publicadas las pruebas, se dictará sentencia, sin alegatos ni vista pública;» pero esto solo tendrá lugar, cuando los interesados no hubiesen propuesto tachas, pues si las proponen, deberán guardarse los trámites de los artículos 318 al 313 de la propia ley de Enjuiciamiento, no modificados por el 531 sino en cuanto á los términos.

5.ª «Si se interpusiere apelacion, se admitirá en ambos efectos, y sustanciará del modo prevenido en los arts. 840 y siguientes de la ley.» La sustanciacion señalada es la que corresponde á la apelacion de las providencias interlocutorias, con lo cual se propuso el legislador hacer mas breve el juicio de oposicion.

Los artículos 535, 536 y 537 son el complemento de los que van examinados, y contienen reglas generales, que pueden ser fácilmente apreciadas. «Fallados los autos por el tribunal superior, se devolverán al juzgado de primera instancia, con certificacion de la sentencia, sin ningun otro inserto, salvo el de la tasacion de costas, si hubiere habido condena;» pero esto debe entenderse en el caso de que no se haya interpuesto recurso de casacion; porque si se interpusiere, deberá esperarse el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (1). Si por la sentencia del tribunal superior ó del Supremo en su caso, quedase ejecutoriada la declaracion del concurso, el juicio continuará por todos sus trámites; pero si se revocare, quedarán sin efecto todas las medidas preventivas, adoptadas respecto de los bienes, se alzara la intervencion, y se hará entrega al deudor por el depositario y escribano, de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia retenida; y el mismo depositario, si hubiere desempeñado actos de administracion, rendirá cuentas al deudor. Estas cuentas deberán ser documentadas, y la impugnacion, que á ellas se haga, deberá sustanciarse en vía ordinaria.

La revocacion del auto de declaracion de concurso restablece al deudor en la libre administracion de sus bienes, y á los acreedores en libertad de poder utilizar contra aquel los derechos, que le conceda su respectivo crédito; pero, como al reclamarse la declaracion de concurso, pudo cometerse por el acreedor falsedad ó dolo, la ley establece tambien (art. 537), como indemnizacion justísima, que en el caso de revocacion, «queda su derecho á salvo al mismo deudor, para reclamar del acreedor, á cuya instancia se haya declarado el concurso, la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados, si al solicitarlo se hubiere procedido con dolo ó falsedad.»

El deudor podrá hacer uso de este derecho, en su caso, aun cuando no se le haya reservado en la sentencia, puesto que se lo reserva la ley. La reclamacion que entable con tal objeto, habrá de sustanciarse en juicio ordinario.

§. 3.º *Embargo y depósito de los bienes del deudor, y ocupacion de sus libros, papeles y correspondencia.*

Tan luego como el deudor es declarado en concurso, además de la acumulacion de los pleitos ejecutivos, que se sigan contra el mismo, y de que ya hemos hablado en el párrafo 3.º, el juez que haya hecho aquella declaracion, debe, segun el art. 524, dictar las providencias necesarias para el embargo y depósito de todos los bienes del deudor, la

(1) Por sentencias, en apelacion, de 5 de Octubre de 1866, y 12 de Julio de 1869, tiene declarado dicho Tribunal Supremo que procede el recurso de casacion contra las sentencias de esta clase.

ocupacion de sus libros y papeles, y la retencion de su correspondencia. La generalidad de este precepto indica bien claramente que se ha dejado al buen juicio del juez que conozca del concurso, determinar la forma en que deban realizarse las medidas preventivas, ordenadas, para evitar que se cometan abusos y fraudes, y que se distraigan papeles de importancia, ó bienes muebles de algun valor, en perjuicio de los acreedores legítimos.

Para ello convendrá comenzar mandando en la misma providencia, en que se haga la declaracion del concurso y se decreten el embargo y demás medidas indicadas, que el actuario se constituya desde luego en la casa del deudor, y ocupe y anote todos los bienes muebles ó semovientes, que éste posea, sellando los departamentos necesarios, y dejando para su custodia, si fuere indispensable, un alguacil del juzgado. Los libros de cuentas y papeles deberán tambien ser inmediatamente ocupados, y, segun sea su importancia, el actuario podrá conservarlos en su poder, ó depositarlos en persona de arraigo y confianza, porque son muy frecuentes los casos, en que, limitándose el escribano actuario á sellar los departamentos, donde se dejaron los bienes muebles y papeles, unos y otros han sido cambiados y sustraidos. En cuanto á la retencion de la correspondencia, bastará que se pase la conveniente comunicacion al administrador de correos de la cabeza de partido, donde se haga la declaracion de concurso, ó al del domicilio del deudor, y á los demás que sea necesario, para que la pongan á disposicion del juzgado.

Respecto de los bienes inmuebles, deberá intervenirse ó embargarse su capital y sus rentas. Lo primero, esto es, el embargo del capital, tendrá lugar por medio de mandamientos, espedidos á los registradores de la propiedad de los diferentes pueblos, donde radiquen las fincas del concursado. Lo segundo se efectuará, requiriendo á todos los arrendatarios ó inquilinos de los mismos, para que acudan con los pagos, en las épocas de su respectivo vencimiento, al depositario nombrado, sin hacerlo á otra persona, bajo la pena de mal pagado, siendo muy conveniente tomar nota del último recibo, que obre en su poder.

Tanto para la custodia de los bienes muebles, como para la administracion de las raíces, debe nombrarse á la vez un depositario de crédito y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado (art. 525). La ley nada dice de que á este depositario haya de exigírsele fianza; pero teniendo en consideracion que se trata de un nombramiento urgente, y que solo es interino, hasta que se nombran los síndicos, que son los verdaderos administradores del concurso, creemos que queda al arbitrio del juez el exigir fianzas al depositario ó dispensarle de ellas, segun sean la naturaleza é importancia de los bienes del deudor. Téngase presente que el metálico y los efectos públicos han de depositarse desde luego en la Caja general de depósitos, ó en sus sucursales de las provincias.

Para evitar abusos y fraudes, la ley ha establecido una restriccion en lo relativo á la correspondencia del deudor, y consiste, segun el art. 527, en que éste abrirá la correspondencia en presencia del juez y escribano, y recibirá en el acto la que no se refiera á sus bienes ó negocios, reteniéndose hasta su dia la que trate de ellos. Si por el resultado de la correspondencia fuere necesario adoptar alguna medida urgente para la seguridad de los bienes, lo hará el juez, con conocimiento del deudor. Por ese medio se respetan en lo posible los secretos de familia, pero se averiguan todos los que se refieren á la administracion de los bienes del deudor, cuya noticia puede dar ocasion á que se adopten medidas urgentes para la seguridad de los mismos.

Todas las diligencias antedichas deben llevarse á efecto sin dilacion, y sin esperar á que se declare consentida la providencia, en que se haya hecho la declaracion del concurso, y así lo dá por supuesto el art. 533 al ordenar, para el caso de oposicion del deudor, que, mientras se sustancia ésta, *continuarán* ejecutándose dichas medidas, como hemos espuesto en el párrafo anterior. Su ejecucion se encarga al actuario con un alguacil del juzgado. Debe concurrir tambien el deposita-

rio nombrado, para hacerse cargo de los bienes, segun se vayan embargando é inventariando. Y si se ofreciese alguna dificultad, cuya resolucion no sea de las atribuciones del actuario, deberá éste adoptar las precauciones necesarias, para evitar todo abuso ó fraude, y dar cuenta al juez, á fin de que resuelva lo que estime procedente.

En el embargo han de comprenderse, segun el art. 524 de la citada ley de Enjuiciamiento civil, *todos los bienes del deudor*; y deberán reputarse tales todos los que se hallen en su casa y esté poseyendo en la actualidad, mientras no se pruebe lo contrario. Si entre sus propios bienes existen algunos, que notoriamente no le pertenecen, será un abuso incluirlos en el embargo, aunque deberá arreglarse diligencia, con espresion de ellos. Tambien se escluyen de él, por práctica general, el lecho cotidiano del deudor, su mujer é hijos, las ropas del preciso uso de los mismos, y los instrumentos necesarios para el arte ú oficio, á que el primero pueda estar dedicado, pues aunque la ley no ha establecido esta escepcion para el presente caso, la contiene el art. 506 para el concurso voluntario, y además el 951 escluye dichos efectos de todo embargo.

Respecto de los bienes propios de la mujer, cuando es concursado su marido, suelen ofrecerse algunas dificultades, nacidas de la naturaleza misma de ellos, y de los derechos que sobre los mismos tenga el marido. Sabido es que, segun nuestras leyes, fuera del caso de dote estimada, con estimacion que cause venta, la mujer casada conserva la propiedad de sus bienes dotales y parafernales, correspondiéndole además la administracion de éstos, cuando no la ha entregado espresamente al marido; si bien éste debe percibir los frutos y rentas de unos y otros bienes para sostener las cargas del matrimonio. Y como no puede llenar este objeto, cuando es declarado en concurso, puesto que queda privado de la administracion de sus bienes, de aquí deducen algunos jurisperitos que no solo los bienes de la mujer, sino tambien sus frutos y rentas deben escluirse del embargo en los concursos; aquellos, porque no son del marido concursado, y estos, porque en tanto pertenecen al marido, en cuanto cubre las cargas del matrimonio, cuya obligacion no puede llenar porque se lo impide su estado, ó sea la declaracion del concurso.

Se cita tambien en apoyo de esta opinion la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 27 de Setiembre de 1859, en la cual, decidiendo un recurso de casacion contra una sentencia, en que, accediendo á la tercería de dominio, entablada por la mujer, se mandó dejar á disposicion de la misma sus bienes dotales y parafernales, con sus frutos y rentas, que habian sido embargados para el pago de una deuda contraida por el marido durante el matrimonio; se estableció la doctrina de que, justificado por la mujer el dominio de los bienes que reclama como dotales y parafernales, «le corresponden tambien los frutos de los mismos, sin otra responsabilidad que la de atender con ellos á las cargas del matrimonio, y de ningun modo á las obligaciones personales de su marido;» y que este es el verdadero sentido de las leyes y doctrina que se habian citado como infringidas, «pues, si bien reputan propios del marido los productos de la dote durante el matrimonio, es en el concepto de haber de sostener con ellos las cargas de la sociedad conyugal, en las cuales no pueden entenderse comprendidas las deudas contraidas solamente por el marido.»

Sin embargo, no es esta la jurisprudencia que ha prevalecido despues: con mejor acuerdo, sin duda, el propio Tribunal Supremo, en sentencias posteriores, ha establecido la doctrina, conforme á las leyes de Partida y recopiladas, de que las deudas que contrae el marido, durante el matrimonio, son «cargas de la sociedad legal, establecida entre ambos esposos, y deben ser satisfechas por los haberes que en comun adquieran, durante el matrimonio, entre los que figuran los frutos y productos de los bienes aportados por uno y otro cónyuge;» y por consiguiente, que las rentas y frutos de los bienes de la mujer, que deban ingresar en la sociedad conyugal, deben sujetarse al embargo decretado contra el marido, tanto en juicio ejecutivo, como en

concurso de acreedores (1). Y esta es tambien nuestra opinion, por creerla conforme á las disposiciones legales que rigen en la materia, la cual ampliaremos en su lugar oportuno. Véase EMBARGO.

La razon, antes indicada, de que, privado el marido de la administracion de los bienes por la declaracion de concurso, no puede destinar los frutos y rentas de los de la mujer á cubrir las cargas del matrimonio, y deben ser por tanto escluidos del embargo para destinarlos á este objeto, no es fundada, en nuestro concepto. Cargas de la sociedad conyugal son las deudas, contraidas durante la misma, aunque lo hayan sido solamente por el marido, que es el jefe de ella, y si se destinan á cubrirlas los frutos y rentas de los bienes de la mujer, no puede decirse que se distraigan de su objeto. Y si se mira como preferente la manutencion de la mujer y de los hijos, tambien queda cubierta esta carga, durante el concurso, con la asignacion de alimentos, de que trataremos en la seccion VII. De consiguiente, no hay razon fundada para escluir del embargo los frutos y rentas de los bienes propios de la mujer, siempre que con anterioridad al concurso no haya sido legalmente privado de ellos el marido. Pero no deberán embargarse los mismos bienes, cuando conste claramente que son de la mujer, porque la ley solo autoriza el embargo de los bienes del concursado; y si se embargan, podrá aquella hacer uso de su derecho preferente para que se le entreguen, concurriendo para ello al concurso.

Habria aun que añadir que el concurso no rompe la sociedad ó consorcio conyugal; y por ello, si satisfechos los concurrentes, resultaren sobrantes, procedentes de los frutos y rentas de los bienes del consorcio, deben entrar en poder del marido, porque á él incumbe, con sus cargas y emolumentos, la administracion conyugal.

Véase, además, lo que hemos espuesto sobre los bienes, que han de sujetarse al concurso, en el párrafo 3.° de la seccion III.

(1) Sentencias, en casacion, de 7 de Febrero de 1863; en injusticia notoria, de 13 de Octubre de 1866, y en casacion, de 11 de Febrero de 1870.

§. 6.° *Atribuciones y deberes del depositario.*

Hemos dicho en el párrafo anterior, que al propio tiempo que se haga la declaracion del concurso y se acuerde el embargo de los bienes del deudor, debe hacerse el nombramiento de depositario; que éste debe ser persona de crédito y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado; y que debe concurrir al embargo, para hacerse cargo de los bienes que han de quedar bajo su custodia y administracion, que serán todos los que se embarguen, escepto el metálico y efectos públicos, que han de depositarse en la Caja de depósitos. Este depositario queda sujeto á todas las obligaciones y responsabilidades de su cargo, tanto civiles como criminales, que pueden verse en su artículo respectivo (V. DEPOSITARIO); pero además, en consideracion á la especialidad del caso, la ley de Enjuiciamiento civil le marca sus deberes particulares, y fija la retribucion á que tiene derecho.

Segun el art. 526, además de la custodia de los bienes muebles y semovientes, tiene el depositario de los bienes del concurso las atribuciones y obligaciones siguientes:

1.° *Administrar los bienes del concurso.* Este es el primer deber de todo depositario de esta clase: gobernar y cuidar los bienes de modo que se conserven sin deterioro, y sean productivos los que deban serlo por su naturaleza ó por el uso á que están destinados. Para llenar este deber, procurará el depositario el cultivo ó arriendo de las fincas ó de cualquier establecimiento industrial ó fabril, si lo hubiere, no alterando la forma hasta entonces guardada, á no ser para precaver inmediatos é inevitables perjuicios, ú obtener mayores y seguras utilidades; en una palabra, practicará á dicho fin, con celo y diligencia, lo propio que haria un buen padre de familias. En cuanto á los gastos, que para ello sean indispensables, el Código de comercio exije el permiso prévio del comisario de la quiebra; pero como la ley de Enjuiciamiento civil nada

dispone sobre esto, al tratar de la administracion de los bienes del concurso, no obstante prevenir en el art. 528, que debe obtenerse la venia del juez para la cobranza de créditos, creemos que debe distinguirse entre los gastos puramente administrativos, que sean urgentes é imprescindibles, y los que constituyan un nuevo gravámen á la masa comun, ó no se hallen en dicho caso. Los primeros podrá hacerlos sin mas autorizacion que el nombramiento del depositario; y para todos los demás la licencia espresa del juez. Debe tener en cuenta el depositario, que su cargo es transitorio, pues solo dura hasta la eleccion de los síndicos, y debe por tanto limitarse á lo que sea preciso para la conservacion y cuidado de los bienes.

2.° *Cobrar cualesquiera créditos, que tuviera el deudor.* Los créditos son realmente una de las especies de bienes; mas como para su realizacion pueden originarse gastos y contraerse responsabilidades, el artículo 528 dispone, que para su cobranza, se obtendrá préviamente la venia del juzgado, que se consignará, bajo la firma del juez y del escribano, en los títulos de los mismos créditos. Estas formalidades son además, en los valores endosables, una garantía segura de la aprobacion del juzgado, la cual hace legítimo el pago.

3.° *Proponer al juez la enagenacion de los efectos, que no puedan conservarse.* Estas palabras indican que solo se refiere la ley á los frutos y bienes muebles ó semovientes, que no puedan conservarse por sus condiciones especiales; y aun entonces, para evitar su pérdida, el depositario solo tiene el derecho de *proponer*; pero no el de *realizar*, mientras la propuesta no haya sido aprobada por el juez. «La venta, dice el art. 528, se hará con las formalidades, prevenidas para las que hayan de ejecutar los síndicos,» cuyas formalidades las espondremos en el párrafo 8.° de la presente seccion.

Estas son las obligaciones que la ley impone especialmente al depositario del concurso, sin perjuicio de las generales, inherentes á ese cargo. Y como complemento de ellas, ha de tenerse presente, que dicho depositario no debe conservar en su poder los ondos que recaude, ya procedan de rentas, ya de la cobranza de créditos ó de la venta de efectos, que no puedan conservarse: todos los fondos recaudados se depositarán en el establecimiento público, destinado al efecto, que hoy es la Caja de depósitos, como previene el artículo 529. Podrá, sin embargo, retener, pero con autorizacion del juez, los que sean indispensables para cubrir las atenciones ordinarias de la administracion. El juez deberá conservar los resguardos de dichos depósitos, para entregarlos en su dia á los síndicos, segun lo prevenido en el art. 549.

El depositario tiene derecho á la retribucion correspondiente por su trabajo y responsabilidad. Para uniformar la práctica, y evitar los abusos, que antes solian cometerse, la ley de Enjuiciamieto civil ha fijado esa retribucion (art. 530), concediéndole dietas por la custodia y conservacion de los bienes, y además un tanto por ciento de lo que recaude, proporcionado al trabajo y diligencia que para ello haya de emplear. Se dá al juez la facultad de señalar las dietas; pero sin que puedan pasar en ningun caso de 50 reales diarios: dentro de este límite fijará la cantidad que estime justa, teniendo en consideracion la entidad y circunstancias de los bienes, confiados á la custodia del depositario. Y además de las dietas, debe abonársele: medio por 100 sobre la cobranza de créditos; 1 por 100 sobre el producto líquido de la venta de frutos, ó de los bienes muebles ó semovientes que se enagenen; y 5 por 100 sobre los productos líquidos de la administracion, que no procedan de las causas antedichas. El depositario no puede aspirar á otra recompensa, aun cuando la funde en trabajos estraordinarios.

Cesará el depositario en su cargo, luego que se haga el nombramiento de los síndicos del concurso, si se sigue el juicio adelante, ó cuando cause ejecutoria el auto revocando la declaracion del concurso, si se hubiere opuesto el deudor. En ambos casos debe el depositario hacer entrega de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia retenida, que obren en su poder, y rendir cuentas docu-

mentadas de su administracion; en el primero á los síndicos, que son los representantes de la masa concursada, y en el segundo al mismo deudor, como ya se ha dicho anteriormente en el párrafo 4.°

§. 7.° *Formalizacion del juicio de concurso: convocacion de los acreedores: nombramiento, posesion, atribuciones y cesacion de los síndicos.*

El juicio de concurso se formaliza con la convocacion ó citacion de los acreedores, para que acudan á él á hacer uso de su derecho, luego que queda consentido ó ejecutoriado el auto en que se hizo la declaracion del concurso. Entonces principia el verdadero pleito ó concurrencia de acreedores: las diligencias practicadas anteriormente, y que hemos espuesto en los párrafos que preceden, son preventivas del juicio, como dirigidas unas á prepararlo, y otras á poner en seguridad los bienes.

Datos que debe facilitar el deudor. Y todavia, despues de consentida ó ejecutoriada dicha declaracion, hay que practicar otra diligencia, que tiene tambien el carácter de prejudicial, como que se dirige á que el deudor dé noticia de todos sus acreedores, y manifieste las causas, que hayan motivado su estado de insolvencia; datos convenientes para la marcha sucesiva de los procedimientos.

En el concurso voluntario, el deudor, que es quien lo promueve, está obligado á presentar estos datos, y además una relacion de todos sus bienes, con el escrito en que solicite la declaracion de concurso, sin cuyo requisito no puede accederse á su pretension. Pero en el necesario, como se procede á instancia de los acreedores, sin oir al deudor, y á veces contra su voluntad, es indispensable obligar á éste, despues de hecha la declaracion de concurso, á que presente dichas noticias, por ser el único que puede facilitarlas. A este fin ordena el art. 538 de la ley de Enjuiciamiento civil, que «consentida ó ejecutoriada la declaracion de concurso, el juez mandará hacer saber al concursado que, en el término de segundo dia, presente relacion de sus acreedores, con la oportuna manifestacion de las causas de su estado.» No se le exige la relacion de bienes, y es sin duda porque debiendo preceder á este trámite el embargo y depósito de todos los del deudor, de esta diligencia resultará cuantos y cuáles sean. La relacion y memoria, ó manifestacion antedichas, deberán presentarse firmadas por el deudor, y en la forma que hemos indicado al tratar del concurso voluntario, párrafo 3.° de la seccion III.

En la práctica ha resultado que los dos dias, que se conceden para presentar la relacion de acreedores y manifestacion de las causas del concurso, pasan casi siempre sin que el deudor cumpla lo mandado; y lo que es peor, muchas veces no se puede obtener la presentacion de dichos documentos. En el primer caso, no tratándose de un término improrogable, no habrá inconveniente en prorogarlo, á juicio prudente del juez. En el segundo, no siendo posible invocar, ni aun por analogía, el precepto de la ley mercantil, que previene se encargue en tal caso la formacion del balance á un comerciante esperto, porque los particulares no tienen el deber de anotar en libro alguno sus operaciones financieras, el juez deberá adoptar todas las medidas coercitivas, que sean procedentes con arreglo á derecho, para obligar al deudor á la presentacion de los mencionados documentos, y si no los presentare, continuará la sustanciacion del concurso, sin mérito de los mismos. Lo propio habrá de hacerse en los casos de ausencia ó incapacidad del deudor, no previstos tampoco en la ley.

Convocacion de los acreedores. Para que la declaracion de concurso necesario pueda llegar á conocimiento de todos los acreedores, dispone el mismo art. 538, antes citado, que el juez «mandará tambien fijar edictos en los sitios públicos, é insertarlos en los periódicos del pueblo, si los hubiere, en el *Boletin* de la provincia, y si el juez lo creyere conveniente, atendidas la importancia y circunstancias del concurso, en la *Gaceta de Madrid*, anunciándolo y llamando á los acreedores, á fin de que se presenten, dentro de 20 dias, con los títulos justificativos de sus créditos.» Este lla-

mamiento reune la mayor publicidad posible, y los que por virtud de él se consideren con derecho á comparecer, deberán hacerlo presentando el título justificativo de su crédito y pidiendo se les tenga por cumplidos y por parte. El juez tendrá por presentados los documentos y por parte á los acreedores, hasta que se nombren los síndicos, y todas las providencias, que se dicten, se notificarán á los representantes de los mismos acreedores; sin que por entonces pueda resolverse cosa alguna, relativa á la legitimidad de los créditos reclamados. Todo el que presente un título justificativo, esté, ó no, comprendido en la relacion de deudas, tiene el derecho de comparecer en el juicio, y tomar parte en la eleccion de síndicos, como luego veremos.

Trascurridos los 20 dias antedichos, háyanse ó no presentado acreedores, los convocará el juez á junta general para el nombramiento de síndicos (art. 539). La convocacion se hará por cédula á los acreedores, que se hayan presentado, y á los demás por edictos, todo en la forma que se esplicó respecto de la quita y espera, en el párrafo 1.° de la seccion IV. En las cédulas y edictos se señalarán el dia, hora y sitio de la reunion, la cual no tendrá efecto hasta pasados veinte dias, desde la fecha de la convocatoria (art. 540). Parecia mas natural que la citacion por edictos se hiciera solo para los acreedores desconocidos, y que los que comparecieron por medio de procurador, y aquellos cuya residencia conste en la relacion de deudas, fueran citados, ya en la persona de su representante, segun el art. 16 de la propia ley de Enjuiciamiento, ya personalmente. Sin embargo, el precepto de la ley es terminante, y segun él, solo han de ser citados personalmente *los acreedores que se hayan presentado, y los demás por edictos.*

Nombramiento de los síndicos. Llegado el dia designado para la junta, se procederá á celebrarla, bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano. «Solo podrán concurrir á ella los acredores que hayan presentado los títulos de sus créditos, ó que los presenten en el acto;» de manera que el juez deberá examinar los títulos de los que acudan por primera vez, y declararlos ante todo parte en el juicio. Tambien deberá examinar los poderes de los que concurran en representacion de algun acreedor, y declarar su legitimidad, cuidando mucho de que todos estos pormenores y cuanto ocurra en la junta se determinen bien en el acta que debe levantarse. Principiará la sesion, una vez constituida legalmente la junta, por la lectura de las disposiciones de la ley, que tienen relacion con el nombramiento de síndicos y su impugnacion, y continuará dándose cuenta de todos los antecedentes de la declaracion de concurso, de las diligencias de ocupacion de bienes y papeles, y de cualesquiera otros incidentes que hayan tenido lugar.

«Hecho esto, se procederá al nombramiento de síndicos, quedando elegidos los que lo hayan sido por la mayoría, en la forma prevenida en el art. 511;» esto es, los que hayan tenido á su favor las dos terceras partes de votos de los acreedores, concurrentes á la junta, siempre que representen las tres quintas partes del haber pasivo del concurso. «Si en el primer escrutinio no reuniere ninguno las mayorías de número y cantidades, se procederá á nueva votacion entre los cuatro que se hayan acercado más á una y otra mayoría. Cuando en este segundo escrutinio tampoco reuniere ningun acreedor dichas dos mayorías, quedará elegido el que haya sido designado por la mayoría relativa de votos y el que hubiere tenido en su favor la mayoría, tambien relativa, de cantidad. Caso de que en el primer escrutinio hubiese reunido un acreedor las dos mayorías, se repetirá la votacion para el nombramiento del otro síndico; y si nadie las obtuviere, se entenderá nombrado el que, habiendo tenido en su favor una de ellas, sea interesado personalmente por mayor suma en el concurso.» Estas son las disposiciones consignadas en el art. 541 de la ley de Enjuiciamiento civil, que regulan la marcha de la junta para el nombramiento de síndicos y la forma en que estos deben ser elegidos.

Los síndicos son los que representan los derechos de todos los acreedores y los que reasumen los del concursado, constituyéndose

en administradores de todos sus bienes, y por esta razon la ley quiere que su nombramiento sea debida á la voluntad del mayor número. «En cada concurso se nombrarán dos síndicos, cuyo número podrá aumentarse al de tres, por acuerdo de dos terceras partes de los acreedores concurrentes á la junta» (artículo 543); pero de la misma manera que puede aumentarse el número, á voluntad de los acreedores, debia tambien consentirse que pudiera nombrarse uno solo, sobre todo en concursos de poca importancia. Si fueren dos y discordaren, deben elevar al juez sus opiniones por escrito para que éste resuelva.

Fijado el número de síndicos, veamos las cualidades necesarias para dicho cargo. Dice la propia ley (art. 542), que «la eleccion ha de recaer *necesariamente* en acreedores, que se hallen presentes, que lo sean por derecho propio, y no en representacion de otro, y que no tengan *conocida preferencia* ó la pretendan. Solo á falta de acreedores por derecho propio podrán ser elegidos los representantes de otros. Si no hubiere más que acreedores *conocidamente preferentes*, ó que sostengan serlo, y representantes de otros comunes, la eleccion deberá recaer en estos.»

De estas palabras ha nacido la duda, infundada por cierto, de si los acreedores hipotecarios, ó de otra manera privilegiados, pueden ser elegidos síndicos, ó están *absolutamente* escluidos. El tenor de la ley no puede ser más terminante: están absolutamente escluidos en concurrencia con acreedores comunes; pero no cuando concurran solos, pues entonces, en un concurso en que no hubiere sino acreedores privilegiados, no podrian nombrarse síndicos, ni por tanto formalizarse el juicio de concurso. La esclusion, pues, de los privilegiados, es relativa; no absoluta, y eso por la obvia razon de que la ley, y con ella el buen sentido, dispensa más confianza á los acreedores comunes, que á los privilegiados; por que estos todo lo esperan, ó esperan mucho, de su privilegio; aquellos de su celo y actividad.

Pero, á nuestro juicio, ya que se permite á los acreedores poder aumentar los síndicos al número de tres, deberia tambien consentirse que uno de ellos pudiera ser de los preferentes, pues así no se privaria la masa de los conocimientos especiales, que pudiera tener un acreedor, y no se repetiria el abuso de que los acreedores comunes, para ver si pueden aumentar los bienes por la acumulacion de las rentas, dilaten la venta de los raíces y hagan interminables los concursos.

Otra dificultad, muy frecuente en la práctica, es la de no poderse constituir la junta para la eleccion de síndicos por la no asistencia de los acreedores suficientes para constituir las dos mayorías legales de número y cantidad. La ley no ha previsto este caso; pero cuando ocurre, los acreedores deben pedir al juez, en el acto de la junta, que acuerde de nuevo la celebracion de otra, bajo apercibimiento de que esta se celebrará con los acreedores que concurran, adoptándose sus resoluciones por mayoría relativa. Solo de este modo podrá continuar el concurso, que no seria justo se paralizase indefinidamente por la voluntad de las minorías.

Proposiciones de convenio. Tambien se ha llegado á poner en duda, si en el acto de la celebracion de la junta para la eleccion de síndicos, será lícito al deudor hacer á sus acreedores proposiciones de convenio; mas, á pesar del silencio de la ley, sostenemos, y es constante en la práctica, la opinion afirmativa, pues, segun el art. 611, *en cualquier estado* del juicio de concurso pueden hacer los acreedores y el concursado los convenios que estimen oportunos. El Código de comercio, mas rígido en esta materia que la ley comun, permite tambien al quebrado (art. 1067) hacer proposiciones de convenio en dicha junta, y no debe pasarse al nombramiento de síndicos, sino en el caso de que sean desestimadas. Como los acreedores son los únicos, que tienen interés en continuar el juicio contra el deudor, es muy justo que se les deje en completa libertad de accion para renunciar sus derechos hasta el límite que consideren conveniente. Si hubiere proposiciones de convenio y fuesen desechadas, se pasará á la eleccion de síndicos: si se aprobasen, se practicará lo que dispone el art. 624, pudiendo ser impugnado el convenio, en la forma, término, y por las cau-

sas espresadas en los arts. 625 y siguientes, y que espondremos en la seccion VI.

Oposicion á la eleccion de los síndicos. La eleccion de todos ó alguno de los síndicos, podrá ser impugnada por los acreedores y por el deudor. Si lo fuere, se formará pieza separada, en la cual se sustanciará la oposicion, en los términos espresados en el artículo 554, para la que se hace á la declaracion del concurso, y que hemos espuesto en el §. 4.°, con la sola variacion de que la apelacion de la sentencia, que recaiga, se admitirá en un solo efecto; todo para que no se suspenda la sustanciacion del concurso por la oposicion al nombramiento de síndicos. Así lo ordenan los arts. 545 y 546 de la citada ley de Enjuiciamiento, y es lo único que se dispone sobre esta materia, cuyo complemento deberá buscarse, por tanto, en lo que está prevenido para la espresada oposicion á la declaracion del concurso. Como en ella, litigarán unidos, y bajo una misma representacion, el deudor y los acreedores que sostengan una misma pretension.

No habiendo establecido la ley, ni el término para formalizar dicha impugnacion, ni quiénes son los acreedores que pueden hacerlo, hay que buscar lo primero en la referencia, que dichos artículos hacen á la oposicion á la declaracion de concurso. Esta debe tener lugar dentro de los tres dias, siguientes al en que haya sido notificada dicha declaracion, y por consiguiente, el mismo plazo deberá entenderse señalado para oponerse á la eleccion de síndicos, mediante una demanda ordinaria, que deberá sujetarse á la tramitacion especial del artículo 554. Los acreedores, que pueden oponerse á la eleccion de síndicos, serán los que no hayan concurrido á la junta; ó concurriendo, hayan votado con la minoría; porque seria un contrasentido conceder aquel derecho á los que, votando con la mayoría, hubiesen contribuido á la eleccion de la sindicatura.

Tambien calla la ley las causas, por que puede ser impugnado el nombramiento de los síndicos; pero como el art. 542 determina las circunstancias, que *necesariamente* han de reunir los acreedores, para obtener aquel cargo, es evidente que la falta de dichas circunstancias será causa legítima de impugnacion. Lo será igualmente el haberse procedido contra derecho en el modo de la eleccion, esto es, por defecto en las formas establecidas para la convocacion, celebracion y deliberacion de la junta, y por falta de personalidad ó de representacion en alguno de los que hayan concurrido con su voto á formar la mayoría. Estas causas las determina la ley en el art. 543, para un caso análogo, y en todas ellas concurre una violacion del derecho, que impide la validez del acuerdo de la junta.

Posesion de los síndicos. No suspendiéndose la sustanciacion del juicio de concurso por la oposicion al nombramiento de síndicos, era natural que, nombrados estos, se les pusiera en posesion y se les diese á reconocer donde fuera necesario. Así lo ordena el artículo 547 de la ley de Enjuiciamiento civil, añadiendo que «su nombramiento (el de los síndicos) se publicará además por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre, é insertarán en los periódicos oficiales, en que se hubiere insertado la convocatoria para su nombramiento. En estos edictos se prevendrá que se haga entrega á los síndicos de cuanto corresponda al concursado.» Esta disposicion tiene por objeto dar á conocer á todos quiénes son los que han sustituido al deudor comun, en lo relativo á su personalidad, á fin de que se entiendan con ellos, y no con éste, en todo lo relativo al caudal concursado. Hecho público el nombramiento, deberá tenerse por mal pagado lo que, despues de él, se entregue al deudor, al depositario, ó á cualquiera otra persona que no sean los síndicos.

Atribuciones de los síndicos. A estos corresponde la administracion de todo el caudal concursado, y la representacion del concurso. En el primer concepto, deben recibir por inventario los bienes, libros y papeles, pertenecientes al mismo concurso, haciéndoles la entrega, con intervencion del escribano, el depositario en cuyo poder deben obrar, el cual debe rendir cuentas á los mismos, segun se ha dicho en el párrafo anterior; y están

obligados á cuidar de los bienes, procurar su venta del modo más ventajoso, cobrar los créditos, rendir cuentas, y demás á que está sujeto todo administrador judicial, segun se espondrá en el párrafo siguiente. Y como representantes del concurso, tienen los síndicos á su cargo la defensa de todos los derechos y el ejercicio de las acciones y escepciones, que competan al concurso. Deben, por tanto, entablar y seguir, como demandantes ó demandados, los pleitos, que interesen al caudal concursado; y en el mismo juicio de concurso tienen, en tal concepto, la representacion de los acreedores y la intervencion que se esplicará en el párrafo 9.° y siguientes, y en las secciones VI y VII. Sobre aquel punto téngase presente, que á la sindicatura, como representacion legal del concurso, competen las mismas acciones, que hubiera podido ejercer el concursado contra las personas á él obligadas (1), sin que pueda ejercitar otros derechos que los que este tuviera (2); y que en estos casos debe seguirse el fuero del demandado, como se ha dicho en el párrafo 2.° de esta misma seccion.

Retribucion de los síndicos. Como es de importancia el trabajo de la administracion, y aún la responsabilidad que aceptan los síndicos de un concurso, la ley (art. 544) declara, que «tienen colectivamente derecho á la siguiente retribucion de sus servicios, que dividirán entre sí, por partes iguales, si no hubieren convenido cosa en contrario. Sobre la realizacion de cualesquiera efectos públicos, créditos ó derechos del concurso, medio por ciento: sobre el producto líquido de ventas de alhajas, frutos, muebles ó semovientes, dos por ciento: sobre el producto líquido de venta de bienes raices, uno por ciento: sobre los productos líquidos de la administracion que no procedan de las causas espresadas en los párrafos anteriores, cinco por ciento. Si con motivo del desempeño de su cargo tuvieren que hacer algun viaje, se les abonarán los gastos que les ocasionare, en virtud de providencia del juez y de mandamiento que se librará al efecto.»

Esta disposicion ha regulado el antiguo premio á los administradores de bienes intervenidos judicialmente; pero, á nuestro entender, hubiera sido mas conveniente señalar un tipo máximo, dejando al juicio prudente del juez el fijar la recompensa de la sindicatura. De todos modos la ley está muy terminante, si bien se ha cuestionado ya sobre el premio que corresponde á la administracion de bienes raices, en el caso de que estos, por radicar en distintos puntos, estén sujetos á administraciones subalternas. La administracion de bienes raices no puede exigir, como premio, segun la ley, mas del cinco por ciento sobre el importe líquido de todos los ingresos, que haya en ella, por conceptos diversos de los de venta y cobranza. Por esta consideracion creemos que á las administraciones subalternas no se les podrá abonar mayor premio, que el mencionado cinco por ciento, y la sindicatura no deberá exigir por la cobranza de los valores, que remitan los administradores subalternos, mayor premio que el medio por ciento.

Los gastos de viaje se abonarán á los síndicos en virtud de providencia del juez, lo cual equivale á decir que éste apreciará y resolverá en cada caso, cuando se trata de viajes propios y naturales en toda administracion, y cuando de aquellos que merezcan una indemnizacion especial. Si los síndicos fueran letrados ó procuradores, y como tales se encargaran de la defensa de la sindicatura, tendrán derecho á percibir la recompensa de este trabajo, ageno á la administracion, con arreglo á su derecho respectivo. La retribucion, que la ley concede á los síndicos, se dividirá entre estos, en la forma especial que hayan convenido, de igual manera que pueden repartirse el trabajo; pero la ley declara, que no existiendo convenio, la retribucion se dividirá entre ellos por iguales partes.

Cesacion de los síndicos. Con la terminacion del juicio, aunque sea por convenio, cesan naturalmente los síndicos en el ejercicio de su cargo, puesto que terminan sus funciones, debiendo rendir la cuenta general de que

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en competencia, de 14 de Diciembre de 1861.
(2) Id. de id., en casacion, de 27 de Junio de 1867.

se hablará en el párrafo siguiente. Pero pueden tambien cesar todos, ó alguno de ellos, durante la sustanciacion del juicio, por cualquiera de las causas que siguen:

1.ª Por muerte natural ó civil, ó por cualquier otro impedimento físico ó moral.

2.ª Por renuncia. No habiéndola prohibido la ley, ni declarado obligatorio el cargo, podrá hacerla cualquiera de los síndicos; pero tendrá que seguir en el ejercicio de sus funciones, si la hace despues de aceptado el cargo, hasta que le sea admitida por la junta general de acreedores. Correspondiendo á esta el nombramiento, debe ser atribucion de la misma el admitir la renuncia, toda vez que la ley no ha dispuesto otra cosa.

3.ª Por suspension motivada, que puede decretar el juez en el caso de abusos, sin perjuicio de dar cuenta á la junta de acreedores, la cual podrá acordar la destitucion (*art.* 552 *de la ley de Enj. civil*), como se dirá en el párrafo siguiente.

4.ª Por no haber sido reconocido el crédito reclamado por el síndico (*art.* 589 *de idem*). En este caso cesa su aptitud legal, y debe cesar tambien en sus funciones.

5.ª Por impugnar en cualquier sentido alguno de los acuerdos de la junta de acreedores (*el mismo art.* 589); pues en tal caso se hacen incompatibles los síndicos, por no poder llenar el deber, que les impone la ley, de sostener los acuerdos de la junta.

En todos estos casos debe el juez convocar inmediatamente á junta de acreedores, para que se proceda al reemplazo del síndico ó síndicos, que hayan cesado, debiendo practicarse todo en la forma espuesta anteriormente para la primera eleccion de síndicos.

Formacion de piezas separadas. Establecida la representacion legal del concurso con el nombramiento de los síndicos, y puestos estos en posesion de su cargo, se entra de lleno en el juicio. Para simplificar los procedimientos, y evitar en ellos la confusion y embrollo, que en la práctica antigua contribuia á hacerlos interminables, ha dispuesto con acierto la ley de Enjuiciamiento civil (*artículo* 548) que desde este estado en adelante se siga el juicio en tres piezas, sin perjuicio de subdividir cada una de ellas en los ramos separados, que sean necesarios para la claridad y mejor direccion del concurso (*arts.* 572, 587 *y* 598). La propia ley ha determinado la denominacion y objeto de cada una de dichas tres piezas separadas, á saber:

La 1.ª, que será la que contenga las actuaciones anteriores, se denominará de *administracion del concurso*, y en ella se sustanciarán los incidentes, que se refieran á la misma administracion, con inclusion de la venta de los bienes, y distribucion de su producto entre los acreedores.

La 2.ª se destinará al *reconocimiento y graduacion de créditos.*

Y la 3.ª tendrá por objeto la *calificacion del concurso*, y en su caso la declaracion de inculpabilidad del concursado, ó de exigirle la responsabilidad en que haya incurrido.

Las actuaciones, propias de cada una de estas piezas y lo que debe acordar el juez para formarlas, se espondrán en los párrafos siguientes.

§. 8.º Pieza 1.ª—*Administracion del concurso. Venta de los bienes: cuentas de los síndicos.*

Ya hemos dicho que en la pieza 1.ª han de sustanciarse todos los incidentes, que se refieran á la administracion del concurso: son, por tanto, parte de ello la administracion, propiamente dicha, ó sean las gestiones que tengan por objeto el cuidado, régimen y produccion de los bienes; la venta de los mismos, para con su producto hacer pago á los acreedores, hasta donde alcance, y la rendicion de cuentas. Y como la codicia suele inducir á cometer abusos en el manejo de intereses agenos, los cuales, aún sin esa maldad, pueden ser perjudicados por negligencia del que los maneja; para evitarlo en lo posible la ley de Enjuiciamiento ha adoptado el sistema de la mas ámplia publicidad, disponiendo (*artículo* 551) «que la pieza 1.ª se hallará siempre en la escribanía á disposicion de los acreedores que quieran reconocerla.» Y tambien deberá estarlo á disposicion del deudor, puesto que tan interesado es como los acreedores

en la buena gestion de sus bienes, y que en el artículo siguiente se le concede el mismo derecho que á aquellos, para denunciar los abusos, lo que supone la facultad de enterarse de los autos.

Dicha pieza 1.ª ha de contener todas las actuaciones practicadas para la declaracion del concurso, embargo y depósito de los bienes y nombramiento de los síndicos, tanto en el concurso voluntario, como en el necesario; y en ella ha de acreditarse tambien la conclusion del juicio. De consiguiente, debe considerarse como la pieza ó ramo principal de autos, y por tanto, ha de acordarse en la misma la formacion de las otras dos piezas, luego que sean puestos los síndicos en posesion de su cargo y se les dé á reconocer por medio de edictos y donde fuere necesario, como se ordena en el art. 547.

Hecho esto, ó sea, «publicado el nombramiento de los síndicos, dice la propia ley en el art. 549, se les hará entrega, por inventario, de los bienes, libros y papeles del concurso. El dinero, que hubiere, continuará depositado en el establecimiento, destinado al efecto, á disposicion del juez que conozca del juicio; entregándose á los síndicos el resguardo ó resguardos del depósito, bajo recibo, que se estenderá en esta pieza.» La entrega por inventario de los bienes, libros y papeles del concurso, es un verdadero acto de posesion, que deberá realizarse, previa providencia judicial, con asistencia del deudor, si éste lo reclamase, y sobre todo con la del depositario, á quien corresponde verificar la entrega por haber cesado en su cargo. Los fondos del concurso continuarán en la Caja general de depósitos, ó en la sucursal de la misma donde se hallen, con lo cual se evita que los síndicos, por el deseo de utilizarlos, prolonguen la duracion del concurso: en cambio conservarán los resguardos de las imposiciones, que se procurará, y mandará se hagan á nombre del juzgado, y en forma intransferible.

Puestos así los síndicos en posesion de los bienes, y hecha la entrega á los mismos de los libros y papeles del concursado, es cuando ha de mandarse que se formen las piezas 2.ª y 3.ª, del modo que se espondrá en los párrafos siguientes. Desde aquel acto entran los síndicos de lleno en la administracion del concurso, practicando todas las gestiones que en tal concepto les corresponden. Una de ellas será la de exijir cuentas al depositario, como ya se ha dicho, reclamándolas judicialmente caso necesario, y haciendo los reparos que procedan, todo lo cual habrá de ventilarse en juicio ordinario.

Aunque los síndicos asumen tambien la representacion y defensa de los acreedores, no por eso se priva á éstos de la intervencion y vigilancia, que les interesa ejercer sobre la gestion administrativa de aquellos A este fin, y para que todos los interesados tengan conocimiento de la situacion financiera del concurso, ordena la propia ley de Enjuiciamiento (art. 550) que «en el dia último de cada mes presentarán los síndicos un estado ó cuenta de administracion, la cual se unirá á esta pieza, y el juez dispondrá, bajo su responsabilidad, que las existencias en metálico, que resulten, se depositen en la forma antes establecida.» Dichas cuentas se presentarán con un escrito, y se mandarán unir á los autos, con el objeto de que puedan ser examinadas por los demás acreedores, los cuales podrán interponer las reclamaciones, que estimen convenientes, sustanciándose como incidentes y en ramo separado. A este fin tambien dispone el art. 551, que la pieza 1.ª se hallará siempre en la escribanía, á disposicion de los acreedores, que quieran reconocerla, y el 552, que «el juez podrá por sí, ó á instancia de los acreedores ó del deudor, corregir cualquier abuso, adoptando cuantas medidas considere necesarias al efecto, inclusa la de suspender al síndico ó síndicos, que puedan haberlo cometido. En este último caso convocará á junta de acreedores para que determinen lo que crean mas conveniente.» No era posible, que conocido por el juez del concurso algun abuso de la sindicatura, no pudiera remediarlo inmediatamente. La ley le concede ámplias facultades sobre este punto, y garantiza la arbitrariedad, imponiéndole el deber de convocar desde luego á junta de acreedores, para que estos determi-

nen lo que crean mas conveniente, que lo mismo podrá ser la separacion ó destitucion del síndico ó síndicos que hayan abusado, y su reemplazo, que la aprobacion de su conducta, si encontrasen méritos para ello.

Mandado que el dinero, que hubiere, continúe depositado en el establecimiento destinado al efecto, y que en esta forma se depositen tambien las existencias que resulten de las cuentas mensuales, era necesario resolver qué cantidad debia quedar en poder de los síndicos para los gastos del concurso; y el art. 553 declara que el juez podrá dejar en poder de los síndicos la suma, que se juzgue necesaria para dichos gastos, mandando, en su caso, estraerla del depósito. Este es un estremo que no admite más regla que el prudente arbitrio del juez del concurso. La ley de Enjuiciamiento mercantil limita á mil reales la existencia metálica, que puede reservarse la sindicatura; pero su importe deberá estar en relacion con la importancia de los bienes, sin perder de vista que los síndicos son tambien acreedores, y naturalmente debe haber recaido la eleccion en los de mayor capacidad y moralidad. Convendrá por lo mismo que, fuera de los gastos ordinarios de la administracion, la sindicatura no haga gasto alguno, para el que no haya sido precisamente autorizada.

La disposicion del art. 553 ha dado, además, lugar á una duda muy importante, y esta duda es, si la sindicatura de un concurso podrá ser declarada pobre, cuando los bienes del mismo no permitan litigar como rico. Como los síndicos no solo representan los derechos del deudor, sino tambien los de los acreedores, es evidente que, cuando no existan bienes bastantes en el concurso, ni los tengan tampoco los acreedores, la sindicatura podrá aspirar al disfrute del beneficio legal de la pobreza; pero si, aunque no los tenga el concurso, los tienen los acreedores, la sindicatura habrá de litigar como no pobre, exigiendo los correspondientes dividendos de los acreedores, que fueren parte en el juicio.

Cuando el concurso tenga bienes bastantes, los síndicos deberán abonar preferentemente las costas que se causen, y á ese efecto declaró el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia, en casacion, de 11 de Mayo de 1868, que la disposicion del art. 553 reconoce implícitamente la preferencia, con que deben ser satisfechos los gastos y costas del concurso; preferencia sancionada por el artículo 592. Pero no se reputa definitiva la providencia denegatoria de la solicitud de los síndicos para pedir y probar que el concurso necesita la defensa por pobre, segun otra sentencia, en apelacion, de 21 de Junio de 1866.

Venta de bienes. Como una vez posesionados los síndicos de todos los bienes del deudor, lo que interesa á los acreedores es cobrar sus créditos lo más pronto posible, y á este objeto tiene que dedicarse el producto de aquellos; el art. 554 establece que «en esta misma pieza primera se actuará todo lo relativo á la enagenacion de los bienes del concurso, á la cual se procederá *inmediatamente*, si la mayoría de los acreedores, computada del modo espresado en el art. 511, no acordase lo contrario.» El adverbio *inmediatamente* confirma que la venta de los bienes del deudor se ha de realizar desde luego, para reducirlos á metálico y hacer pago á los acreedores hasta donde alcance, segun su respectiva preferencia; á diferencia de lo que está dispuesto para los abintestatos (art. 397) y por consiguiente para las testamentarías (artículo 503), en que los bienes han de reservarse para entregarlos á los herederos, á fin de que cumplan las obligaciones de su causante. El primer deber de la sindicatura será, por tanto, proceder inmediatamente á la venta de los bienes, de que se les haya hecho entrega. Y si no cumpliesen ese precepto y dilatasen la administracion, cualquiera de los acreedores podrá acudir al juez, reclamando el cumplimiento de lo mandado en el art. 554, y el juez acordará la venta *inmediatamente*, en virtud de las facultades que tiene concedidas para ese caso y otros semejantes por el art. 552.

La ley establece una escepcion de tan terminante precepto, y es, que no se procederá á la venta, cuando las dos mayorías legales hayan acordado lo contrario; mas como no ha de celebrarse para solo este acuerdo una

junta general, creemos que de este punto deberá, en su caso, tratarse en la junta para la eleccion de síndicos, y que si en ella nada se hubiese dicho sobre la venta, esta se realizará como la ley previene, á no ser que los acreedores en mayoría legal pidan su suspension y la convocacion á junta, pues entonces el juez deberá acceder á lo uno y á lo otro. De todos modos, la venta no podrá efectuarse mas que de los bienes que indubitadamente pertenezcan al deudor, y contra cuya pertenencia no penda reclamacion alguna judicial; pues si pendiese, deberá aguardarse su terminacion ejecutoria. Los bienes pueden, no obstante, no venderse, ó aplazarse su venta: y aunque la ley no ha previsto este caso, creemos que los síndicos deberán ajustarse á las reglas que los acreedores hayan dictado en junta general, y á falta de ellas, á las que rigen los arriendos en las testamentarías ó abintestatos, bajo la base siempre de que se efectúen en pública subasta.

Este medio de publicidad lo ha adoptado la ley para las enajenaciones, pues dice el art. 555, que «si los bienes fueran alhajas, frutos, semovientes, muebles ó raices, la venta se hará en público remate. Si fueren efectos públicos ó valores de otra cualquier clase, por medio de agente ó corredor nombrados al efecto por el juez.» Y dando reglas para la venta de aquellos, dispone á continuacion (art. 556) que «á la subasta de los bienes, comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, que son los muebles y raices, precederá el avalúo por peritos nombrados, uno por los síndicos, otro por el deudor, y en caso de discordia, un tercero por el juez. Para la eleccion del tercero, se arreglará el juez á lo prevenido en el art. 303 de esta ley. Hecho el avalúo, se anunciará la subasta por edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los periódicos oficiales, si los hubiere en el pueblo en que radique el juicio y en que estuvieren situados los bienes, señalándose el dia, sitio y hora del remate. En los casos en que el valor de alguno ó algunos bienes inmuebles lo requiera, se hará tambien el anuncio en la *Gaceta de Madrid*.» Estos preceptos, por su misma claridad, no necesitan esplicacion ni ofrecen duda.

A semejanza de lo ordenado para la vía de apremio en el juicio ejecutivo, pero ampliando los términos, dispone el art. 557, que «entre el anuncio de la subasta y el remate deberán mediar al menos quince dias, si los bienes son alhajas, frutos, semovientes ó muebles; y treinta si raices.» Como estos términos se han introducido en beneficio de los acreedores y del deudor, la propia ley permite (art. 558) que en casos urgentes, y por circunstancias especiales, se puedan abreviar de consentimiento de los síndicos y oyendo al deudor. Nótese bien que el abreviar los términos referidos, sólo puede decretarse en casos urgentes y por circunstancias especiales, que los síndicos deberán alegar y el juez apreciará prudentemente. Para ello será necesario el *consentimiento* de la sindicatura, y sólo la *audiencia* del deudor, allánese ó contradiga la prevencion; y el juez lo deberá resolver, sin adoptar los trámites de un incidente, para no invertir en su sustanciacion mayor plazo, del que para los casos ordinarios de venta marca el art. 557.

Ya en el caso de la venta, dispone el artículo 559, que sin el acuerdo de los síndicos y del deudor, no se podrá admitir en las subastas postura inferior á las dos terceras partes del avalúo. Esto quiere decir, que la venta puede realizarse por las dos terceras partes del justiprecio, como acontece en el juicio ejecutivo (art. 985); pero que de esta regla general solo puede dispensar la voluntad de aquellos, á quienes interesa el alza ó baja del tipo de la enajenacion. Estando, pues, conformes síndicos y deudor, y constando esta conformidad en el acto del remate, será admitida dicha postura inferior; pero el juez convocará á junta de acreedores, segun añade el propio art. 559, para que decidan sobre su aprobacion lo que estimen conveniente, porque no seria justo que los síndicos y el deudor fueran árbitros del precio de los bienes, con perjuicio de los demás acreedores. Sin embargo, «esto no tendrá aplicacion, cuando los síndicos estuvieren autorizados por la junta de acreedores para admitir pro-

posiciones inferiores á las dos terceras partes del avalúo, en cuyo caso su conformidad y la del deudor bastarán para que sean aprobadas.»

Sobre este mismo punto tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 13 de Junio de 1862, que las disposiciones, que contiene el art. 559 de la ley de Enjuiciamiento civil, relativas á las subastas judiciales de los bienes de un concurso, se refieren á los casos en que la postura que se haya hecho á ellos, sea inferior á las dos terceras partes del avalúo: de lo cual se deduce que, cuando la postura cubre dichas dos terceras partes, no es necesario el acuerdo y conformidad de los síndicos y del deudor, ni la aprobacion de la junta de acreedores, para la validez y firmeza del remate, una vez aprobado por el juez; y cumplida esta formalidad, debe procederse, con arreglo al artículo 560 de la misma ley, á otorgar la oportuna escritura en favor del rematante. En efecto, dicho art. 560 declara que hecho y aprobado el remate, se procederá, en los casos que corresponda, á otorgar las oportunas escrituras en favor del rematante, las cuales serán suscritas por los síndicos, mediante la incapacidad legal, que desde la declaracion de concurso, pesa sobre el deudor. El precio de las ventas se constituirá en depósito de la manera antes indicada (art. 561).

Siguiendo el sistema guardado en el juicio ejecutivo, la ley prevee el caso de que no resulte postor en la subasta, y resuelve que, «si no hubiere postura admisible, se procederá á la retasa de los bienes, en la forma establecida para el primer avalúo, y se repetirá la subasta, en iguales términos que la anterior. Si en esta subasta no hubiere tampoco postura admisible, se convocará á junta de acreedores para que acuerden la manera en que los bienes hayan de adjudicarse. La adjudicacion se hará por las dos terceras partes del último avalúo, á no convenir en otra cosa los acreedores y el deudor» (art. 562, 563 y 564). Aunque la ley no lo dice, para tomar acuerdo en la junta, será necesario que se reunan las dos mayorías legales. Grandes dificultades ofrecerá la adjudicacion de bienes á los acreedores; pero á falta de avenencia, lo mas equitativo y justo será formar cuantos lotes sean posibles y sortearlos entre los interesados. Si hay dos ó más que quieren una misma cosa, deberá subastarse entre ellos y adjudicarse en pago al que mas ofrezca. De todos modos la adjudicacion no podrá hacerse, hasta que se haya ejecutoriado la graduacion de créditos, en la pieza 2.ª, continuando hasta entonces el depósito y administracion de los bienes.

Cuentas de los síndicos. Además del estado ó cuenta mensual de administracion, que deben presentar los síndicos, segun hemos dicho anteriormente, hecho el pago de todos los créditos, ó de la parte de ellos, que los bienes del concurso alcanzaren á cubrir, rendirán una cuenta general, que estará de manifiesto en la escribanía durante quince dias á disposicion del deudor y de todos los acreedores (art. 565). Dicha cuenta deberá presentarse documentada, y podrán impugnarla, tanto el deudor, como los acreedores. «Trascurridos los quince dias, sin hacerse oposicion, el juez aprobará la cuenta y mandará dar á los síndicos el oportuno finiquito. Las reclamaciones, que se hicieren contra la cuenta, se sustanciarán en via ordinaria con los síndicos. En este juicio, los que sostengan una misma causa, litigarán unidos y bajo una misma direccion» (art. 566 y 567).

«Aprobada la cuenta de los síndicos, ó rectificada en su caso, se hará entrega al deudor de los bienes que hubieren quedado despues de pagar los créditos, y de sus libros y papeles. Si no hubieren sido pagados por entero los créditos, se conservarán en la escribanía los libros y papeles unidos á los autos, á los efectos sucesivos» (arts. 568 y 569). Dicha entrega, si es de fondos sobrantes, se hará por medio de libramiento contra los síndicos ó establecimiento donde estén depositados, ó por conducto del escribano, acreditándola en los autos en uno y otro caso: si es de bienes muebles, el mandamiento se espedirá contra los síndicos, en cuyo poder deben existir; y si fuere de bienes raices, se repondrá al concursado en la posesion de ellos, haciéndolo saber á quien corresponda, y alzándose el em-

bargo en el registro de la propiedad. Pero como puede resultar que las deudas no se hayan pagado por completo, para este caso la ley dispone que los libros y papeles se conserven unidos á los autos, *á los efectos sucesivos*, esto es, para continuar los procedimientos, en el caso de que, por haber mejorado de fortuna el deudor, puedan reclamarle los acreedores el pago completo de sus créditos.

Ordena igualmente la ley de Enjuiciamiento civil que en esta misma pieza 1.ª se haga saber á los acreedores el resultado definitivo del concurso, y se decrete en su caso la rehabilitacion del concursado (arts. 570 y 571); pero como nada de esto puede hacerse, mientras no se hallen terminadas las otras dos piezas y todos los incidentes del concurso, el buen método exige que reservemos esta materia para el párrafo 12, último de la presente seccion.

Recordaremos, por último, que esta pieza de autos debe subdividirse en los ramos separados, que sean necesarios para la claridad y mejor direccion del concurso (art. 572). Siempre, pues, que se promueva un incidente, que sirva de obstáculo al curso de la pieza principal, se formará ramo separado sobre él. La sustanciacion de estos incidentes se acomodará á la establecida para los del juicio ordinario (art. 631), siempre que la ley no la haya determinado especialmente.

§. 9.° Pieza 2.ª — *Reconocimiento y graduacion de créditos. Pago de los mismos.*

Basta el epígrafe, para comprender cuál es el objeto de la pieza 2.ª de los autos de concurso. Ha de tratarse en ella, en primer lugar, del reconocimiento de cada uno de los créditos, que se reclamen contra el concursado, á fin de declarar si son ó no legítimos; y en segundo lugar, de la graduacion de los que hayan sido reconocidos como legítimos, para determinar el órden de preferencia, con que han de ser pagados. De consiguiente, en esta pieza se ventila el derecho individual y relativo de los acreedores, y en tal concepto es la mas importante del juicio. Comprende dos partes ó períodos, que pueden considerarse como dos juicios distintos, puesto que cada uno tiene su objeto especial: en el primero se ventilan los derechos individuales de los acreedores, respecto de los cuales ha de recaer la resolucion definitiva que corresponda; y en el segundo, el derecho relativo de los mismos, tambien con su resolucion definitiva, que determine el órden ó lugar de preferencia entre ellos. Por eso procede esponer con separacion ambos períodos, tratando primero del *reconocimiento de créditos*, y despues de la *graduacion* de los mismos.

Pero antes debemos decir cuándo y cómo ha de formarse dicha pieza 2.ª Segun el artículo 573 de la ley de Enjuiciamiento civil ha de formarse luego que los síndicos sean puestos en posesion de los bienes, y se les haya hecho la entrega de los libros y papeles del concursado. De consiguiente, cuando el juicio haya llegado á dicho estado, deberá el juez acordar en la pieza 1.ª, donde se habrán acordado y practicado aquellas diligencias, que se forme la pieza 2.ª Respecto de los documentos que debe contener, dice únicamente el artículo citado que «á ella se unirá testimonio literal del estado de las deudas presentado por el deudor.» Pero esto no es mas que un dato, que la ley consigna, para evitar dudas y prácticas diversas, y que debe obrar en dicha pieza; sin que por esto escluya los demás que naturalmente ha de comprender. Atendido el objeto de la misma, debe formarse con los títulos de los créditos, que hayan presentado los acreedores, y escritos de su presentacion, á cuyo fin se habrán reservado en la escribanía, sin unirlos á la pieza 1.ª, en la que bastará poner nota de su presentacion y admision; y si se unieron, habrá que desglosarlos. Con estos documentos y el testimonio antedicho, que deberá contener además la providencia que lo motiva, contendrá la pieza 2.ª los datos, que son indispensables para su objeto; y, formada que sea, se acordarán en ella las actuaciones que vamos á esponer.

Reconocimiento de créditos. Luego que esté formada la pieza 2.ª, el juez dispondrá, conforme á lo prevenido en el art. 573, la convocacion de una junta general para el

exámen de los créditos, espresándose así en la convocatoria, como debe espresarse siempre el objeto de estas reuniones, á fin de que en cada junta no se trate mas que de aquello, para que ha sido convocada. La convocacion será individual para los acreedores, espresados en el estado de deudas, y para todos los que, hasta entonces, hubiesen comparecido: para los que no se hallen en cualquiera de estos casos, se publicarán edictos en los periódicos del pueblo, en cuyo juzgado radique el juicio, en el *Boletin oficial de la provincia*, y cuando la importancia y circunstancias del concurso lo exigieren, á juicio del juez, en la *Gaceta de Madrid*. Entre la convocacion y la celebracion de la junta, deben mediar treinta dias por lo menos.

Tan luego como se efectúe la convocatoria, la pieza 2.ª debe comunicarse á los síndicos, para que, en cumplimiento de lo que dispone el art. 574, formen, prévio el exámen de los títulos presentados, para dar cuenta á la junta, un estado de todos los créditos; otro de los que, á su juicio, deban ser reconocidos; y otro de los que no deban serlo. Todos estos estados deberán estenderse en el papel sellado correspondiente y suscribirse por los síndicos, consignando las razones de su opinion, en cuanto á los créditos que deben ser reconocidos y los que no deben serlo. En ellos se comprenderán los créditos de todos los acreedores, que se hayan presentado, hasta la celebracion de la junta. Si en esta comparecieren nuevos acreedores, por sí, ó por medio de procurador, el juez examinará los títulos justificativos y los poderes en su caso, y declarará préviamente sobre su admision, mandando se entere de los títulos á los síndicos, para que en el acto manifiesten si deben ó no ser reconocidos, y los agreguen á los estados respectivos.

Constituida la junta, bajo la presidencia del juez, y con asistencia del escribano, se leerán los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil, relativos al reconocimiento de créditos y al modo de impugnar los acuerdos adoptados sobre él, y se dará cuenta de los estados, que deben presentar los síndicos, los cuales se pondrán á discusion partida por partida. Sobre cada una de las partidas deberá votarse con separacion, quedando reconocidos ó escluidos los créditos, por mayoría, que habrá de constituirse en la forma prefijada en el art. 511 para la quita y espera, y que hemos espuesto en el §. 2.º de la seccion IV. Si no llegasen á reunirse las mayorías de votos y cantidades, el juez, concluida la junta, llamará los autos á la vista y determinará lo que crea mas arreglado á derecho, sobre el crédito á que se refiera la disidencia (art. 575 y 576).

Para proceder en la junta con método y con el debido conocimiento de causa, convendrá leer la opinion de los síndicos sobre cada una de las partidas y un extracto de sus antecedentes y títulos justificativos. Podrán tomar parte en la discusion los acreedores ó sus letrados, y el deudor y el suyo; pero sin permitir que hablen más de dos de aquellos en pró y dos en contra; y en la votacion, todos los acreedores, incluso el interesado en el crédito, que se discuta, puesto que la ley no lo escluye; pero no el deudor. Acerca de las partidas, que por no reunir las dos mayorías legales se someten á la resolucion del juez, éste deberá dictar su fallo motivado, sin vista pública, por no ser necesarias nuevas alegaciones despues de la discusion habida en el acto de la junta.

Podrá suceder que esta no encuentre méritos bastantes para reconocer un crédito, y tampoco para escluirlo, por no hallarlo debidamente justificado. En tal caso acordará que quede pendiente el reconocimiento de dicho crédito, para que el interesado complete su justificacion, lo cual deberá hacer en el tiempo que transcurra hasta la junta, en que se graduan los créditos (art. 577). A este fin se formará el correspondiente ramo separado, en el cual deberán admitirse todas las pruebas legales que se presenten por el interesado, dentro de dicho término; y volverá á deliberarse sobre el reconocimiento del mismo crédito en la junta de graduacion, á la cual presentarán los síndicos su dictámen por escrito sobre si es ó no bastante la justificacion hecha, segun el párrafo 2.º del art. 594.

Para que puedan los síndicos llenar este

cometido, habrá de comunicárseles el espediente, luego que quede hecha la justificacion, ó que manifieste el acreedor que no se propone ampliarla.

Cuando corresponda al juez resolver sobre el reconocimiento ó esclusion de algun crédito, por no haberse reunido, acerca de él, las dos mayorías de votos y cantidades, que es el caso 2.° del art. 576, ¿podrá tambien acordar que quede pendiente su reconocimiento para la junta de graduacion, por no haberse presentado bastantemente justificado? Opinamos que no: en primer lugar, porque la ley solo concede esa facultad á la junta, como hemos visto; y además, porque el juez no puede en ningun caso abstenerse de fallar. Si no encuentra debidamente justificado el crédito, acordará su esclusion, cuya providencia podrá impugnar el interesado, como luego veremos. Podrá, sin embargo, el juez decretar, *para mejor proveer*, cualquiera de las diligencias de prueba que permite el art. 48 de la ley de Enjuiciamiento civil; pero no recibir el incidente á prueba, ni admitir nuevas justificaciones de la parte, porque la ley no lo permite en ese estado.

«Concluida la junta, se estenderá por el escribano un acta de lo que en ella haya ocurrido. Esta acta deberá firmarse por el juez, por el escribano, por los acreedores concurrentes y por el deudor ó su representante, si asistiere.» Esto dice el art. 578, lo cual se ejecuta, y debe ejecutarse, redactando el escribano el acta, segun van ocurriendo las cosas y se van tomando resoluciones. Dejarlo todo para despues de *concluida la junta*, seria espuesto á omisiones involuntarias, y daria ocasion á dilaciones. El espíritu de dicha disposicion es que, concluida la junta, se halle estendida el acta, para que la firmen todos los concurrentes antes de separarse.

El escribano debe consignar en ella, con toda claridad, los créditos que han quedado reconocidos, sin decir nada sobre su preferencia, porque esto ha de ser objeto de otra junta; los que han sido escluidos; los que han quedado pendientes de reconocimiento, por no estar bien justificados, y los que se han reservado para la resolucion del juez, por no haberse reunido sobre su reconocimiento las dos mayorías de votos y cantidades, como asimismo los acreedores que hayan disentido de la mayoría sobre alguna partida y protestado la reserva de su derecho para impugnarla. Además de los acredores y el deudor, ó sus procuradores, en la práctica firman tambien el acta los letrados que concurren para la defensa y direccion de aquellos.

Estendida y firmada el acta, si ha quedado el reconocimiento de algun crédito para la resolucion del juez, este llamará los autos á la vista, á cuyo fin le dará cuenta el escribano sin dilacion, y en auto motivado determinará lo que crea mas arreglado á derecho sobre el crédito á que se refiera la disidencia de la junta, como hemos dicho anteriormente. Este auto habrá de notificarse al acreedor interesado, á los síndicos en representacion de la masa concursada y al deudor.

A fin de que todos los acreedores, hayan concurrido ó no á la junta, tengan conocimiento de lo acordado por esta, ó resuelto por el juez en su caso, sobre el crédito de cada uno de ellos, para el uso de su derecho, ordena el art. 584, que á los acreedores reconocidos se dé un documento firmado por los síndicos, con el visto bueno del juez, en el cual se espresará la cuantía, orígen y reconocimiento del crédito; y que á los acreedores, cuyo crédito no haya sido reconocido, se comunique por los síndicos la decision de la junta, por medio de carta, en forma privada, aunque oficial particular, que el escribano pondrá por sí mismo en el correo. Si algun acreedor reside en el lugar del juicio, será mejor entregarle la carta personalmente. Se estenderá en esta pieza la oportuna certificacion de haberse hecho lo antedicho, y copia de la carta circular. El documento, que sirve de título de reconocimiento del crédito, deberá estenderse en el mismo papel sellado, que se use en el juicio de concurso, y tanto dicho documento, como la carta circular, se dirigirá inmediatamente á los interesados, toda vez que sólo se les conceden 15 dias para formalizar sus reclamaciones.

Impugnacion de los acuerdos sobre reconocimiento de créditos. Pueden no estar ar-

reglados á derecho, ó haberse fundado en datos inexactos, los acuerdos reconociendo ó escluyendo algun crédito, ya procedan de la junta de acreedores, ya del juez, en su caso, y justo es que se permita el derecho de impugnarlos á los acreedores y al deudor que se crean perjudicados. Este derecho lo declara el art. 585 de la propia ley de Enjuiciamiento civil; pero no lo concede á todos los acreedores; sino á aquellos solamente, que no concurrieron á la junta, y á los que, habiendo concurrido, disintieron del voto de la mayoría y protestaron en el acto que se reservaban su derecho, ó que les quedase á salvo, para hacer la impugnacion. De suerte que los acreedores que votaron con la mayoría, no pueden en ningun caso impugnar los acuerdos de esta, porque seria impugnar su propio voto; y tampoco los que votaron con la minoría, si no hicieron en el acto la protesta antedicha: no haciéndola, se entiende que se someten al voto de la mayoría.

Aunque dicho artículo no hace distincion para este efecto, entre los acuerdos de la junta y las resoluciones que dicta el juez, cuando no se reunan las dos mayorías, es de sentido comun que en este segundo caso no debe exigirse la protesta, antes indicada, porque no pudo hacerse sériamente en la junta contra una resolucion, que el juez habia de dictar posteriormente y que era por tanto desconocida. Creemos, que en tal supuesto, podrán impugnar la resolucion del juez todos los acreedores, que en la junta hubieren votado en sentido contrario á lo que este haya determinado ó acordado despues, sin necesidad de la protesta prévia que es indispensable para poder impugnar los acuerdos de la junta.

El propio art. 585 fija el término de quince dias para impugnar los acuerdos de la junta y determinaciones del juez sobre reconocimiento ó esclusion de créditos. Este término habrá de contarse desde el dia siguiente al en que termine la junta, ó al de la notificacion del auto del juez en su caso, puesto que aquí no se dispone otra cosa, y en el art. 596 se previene para caso igual que el término se cuente desde la fecha del acuerdo. Opinan, sin embargo, algunos tribunales que dicho término debe contarse, para cada acreedor, desde que los síndicos le comunican el acuerdo de la junta, atribuyendo á esta comunicacion los efectos de la notificacion del acuerdo. Aunque esta opinion sea mas equitativa, la tenemos por infundada, por la razon antedicha de no haberlo dispuesto la ley, como era necesario para establecer tal escepcion. No se notifican los acuerdos de las juntas, por no ser de necesidad para que se enteren de ellos los interesados. Los acreedores que se han personado en los autos, presentando los títulos justificativos de sus créditos, son citados personalmente á la junta: si no concurren, ni procuran enterarse de lo que se haya acordado en ella, suya será la culpa, y deben sufrir las consecuencias de su negligencia. Y respecto de los que no se encuentren en dicho caso, la ley determina espresamente los efectos de su morosidad, que esplicaremos en el párrafo siguiente, y no están por tanto comprendidos en las disposiciones de que tratamos.

Por estas indicaciones, lo mas seguro, y lo legal, sin duda, será presentar la impugnacion, dentro de los quince dias siguientes á la celebracion de la junta. Y para evitar perjuicios, y que sirva de recuerdo, convendrá que los síndicos procedan, sin la menor dilacion, á comunicar dichos acuerdos á los acreedores, á fin de que tengan conocimiento oficial de ellos los que no hubieren concurrido á la junta, en tiempo portuno, para deducir su demanda de impugnacion. Presentada esta dentro de dicho término, aunque sea necesario rehacerla ó formularla de nuevo, por haberse dado lugar á la escepcion dilatoria de defecto legal en el modo de proponerla, debe estimarse como presentada en tiempo oportuno para los efectos de que tratamos (1).

Dicho término es improrogable, puesto que, segun el art. 586, «pasados los quince dias, sin que haya impugnacion, quedan firmes los acuerdos de la junta, ó determinaciones del juez en su caso, y no se dará curso á ninguna reclamacion contra ellos.» Es condi-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en casacion, de 17 de Junio de 1865.

cion esencial de los términos improrogables, segun el art. 31 de la propia ley de Enjuiciamiento civil, que no pueden suspenderse, ni abrirse despues de cumplidos, *por vía de restitucion*, ni por otro motivo alguno. De suerte que, si el representante de un menor, interesado en el concurso como acreedor, deja pasar los quince dias, sin impugnar el acuerdo de la junta, que escluye su crédito, queda firme para él dicho acuerdo, y no puede pedir restitucion del término para impugnarlo.

Pero los efectos naturales de esta disposicion legal han quedado desvirtuados por una declaracion del Tribunal Supremo de Justicia. Tratábase de un concurso, en el que, por la relacion del deudor, figuraba como acreedor el fondo de Espolios, perteneciente entonces al Estado. Aunque el representante legal de este fué citado personalmente al juicio y á la junta de reconocimiento de créditos, no concurrió, y fué escluido dicho crédito, fundándose la junta en que nadie se habia presentado á reclamarlo, ni á justificar su legitimidad. Trascurrido el término para la impugnacion del acuerdo, el promotor fiscal, en representacion del Estado, presentó demanda de *restitucion in integrum*, no contra el lapso del término; sino contra el acuerdo de la junta, pidiendo que, dejándolo sin efecto, se celebrara esta de nuevo, retrotrayendo el juicio á ese estado, y se fundó en el perjuicio irreparable que habia sufrido el Estado por la indefension en que lo dejó su representante. El Tribunal Supremo casó y anuló la sentencia de la Audiencia, en que no se accedió á dicha demanda, sentando la jurisprudencia de que, contra el acuerdo de la junta, que escluyó dicho crédito sin asistencia del representante del Estado, no obstante su oportuna citacion, competia á éste el beneficio de la restitucion, que nuestras leyes conceden al menor, cuando recibe daño por culpa de su guardador (1).

Si prevalece esta jurisprudencia, que está fundada en la prescripcion terminante de las leyes de Partida, poco importa á los menores que no se dé la restitucion contra el lapso del término para impugnar los acuerdos de la junta, puesto que pueden utilizar ese beneficio contra el mismo acuerdo, que les irroga el perjuicio. Si se anula el acto, y ha de celebrarse de nuevo la junta, entónces podrán impugnar el acuerdo dentro de los 15 dias siguientes, caso de que la junta insista en su anterior opinion, y por esto hemos dicho que quedaban desvirtuadas las disposiciones de que tratamos. Para que estas produzcan todos sus efectos, sin quedar desamparados los intereses de los menores, lo procedente y justo seria exijir la responsabilidad al guardador, que con su negligencia dió ocasion al perjuicio.

Nada dice la ley acerca de las causas, en que podrá fundarse la impugnacion de los acuerdos sobre reconocimiento ó esclusion de créditos. Tales acuerdos, ya procedan de la junta, ya del juez en su caso, podrán ser injustos en el fondo, ó nulos, por haberse faltado á las formas establecidas por la ley. De consiguiente, deberán estimarse como motivos de impugnacion, no solo los consignados en el art. 513 contra los acuerdos concediendo la quita y espera; sino tambien todos los que se refieran al fondo de la cuestion, ó sea á la legitimidad del crédito, cuyo reconocimiento ó esclusion se trate de impugnar. En este caso, el juicio que se promueva versará sobre la legitimidad del crédito, y en aquel sobre la nulidad ó validez del acuerdo.

Las impugnaciones, que se intenten contra los acuerdos de la junta de reconocimiento, ó del juez en su caso, deben sustan-

(1) Sentencia de 13 de Diciembre de 1862 (*núm. 300 de la Colec. leg.*). Dice así:

«Considerando que en 29 de Enero de 1857, dia en que se celebró la junta de reconocimiento de créditos, y al que se refiere en su demanda el ministerio público, era el vicario eclesiástico la persona reconocida, como representante del fondo de Espólios:

»Considerando que ese fondo, como pertenencia del Estado, goza del privilegio de menor, con arreglo á la ley 10, tít. 19, Partida 6.ª, y que escluido el crédito de que se trata, por la referida junta, sin asistencia del indicado vicario, no obstante su oportuna citacion, competia á aquel el beneficio de la restitucion que concede al menor, *cuando recibe daño por culpa de su guardador*, entre otras leyes, la 2.ª del mismo título y Partida.»

ciarse en ramo separado, con los síndicos, por la via ordinaria; y si fueren varias, sobre cada una de ellas se formará un ramo separado (art. 587). De consiguiente, el escrito de impugnacion deberá formularse y documentarse, como está prevenido para las demandas en el juicio ordinario, salvo el acto de conciliacion, del que están esceptuados los concursos y sus incidencias; y cada impugnacion constituirá un verdadero pleito, en el que los síndicos tendrán el deber de sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario, porque son los representantes legales de los intereses colectivos de los acreedores y los defensores de los acuerdos de estos, teniendo que prescindir de sus derechos y opiniones particulares (artículo 588). Sin embargo, como esto seria muy duro, si fuese absolutamente obligatorio, ha dispuesto la ley, para conciliar uno y otro estremo (art. 589), que cesará de hecho en el ejercicio de sus funciones el síndico que impugnare en cualquier sentido alguno de los acuerdos de la junta, lo propio que aquel cuyo crédito no haya sido reconocido, debiendo procederse en seguida á su reemplazo, como ya se dijo en el párrafo 7.° Ese hecho se traduce por una renuncia tácita del cargo.

Cuando no sea el deudor quien impugne el acuerdo, le es potestativo ser parte en los ramos separados, que se formen por la impugnacion de los acreedores; pero deseando la ley que la intervencion del deudor no constituya un entorpecimiento para la marcha del juicio, establece que, si sostuviere lo acordado, litigará en union con los síndicos; si lo impugnare, en union con el acreedor, que lo haya hecho, y en ambos casos bajo la misma direccion de letrado, aunque podrán intervenir en los escritos y demás actuaciones los diferentes procuradores de los interesados (art. 590).

Estos juicios han de seguirse por todos los trámites é instancias del ordinario; pero sin suspenderse la marcha del concurso, pues, ellos no obstante, ha de procederse á la graduacion de créditos, como luego veremos. El papel sellado, que ha de emplearse en cada ramo, será el correspondiente á la cuantía del crédito que se litigue (1). Y creemos tambien que deberá darse al juicio la tramitacion de mayor ó de menor cuantía, ó verbal, segun sea la que se litigue, conforme á las prescripciones generales, que no pueden estimarse contrariadas porque aquí se diga que se sustanciarán en *vía ordinaria*. Seria hasta escandaloso sustanciar por todos los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía la demanda para el reconocimiento de un crédito de cien reales; y tal podria suceder, no siguiéndose nuestra opinion.

Graduacion de créditos. Despues del reconocimiento de los créditos, procede su graduacion para determinar el órden de preferencia con que han de ser pagados. Ese es el órden natural de los procedimientos, y el que ha seguido la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin ha dispuesto en el art. 591, que «pasados los quince dias señalados para la impugnacion de los acuerdos de las juntas de reconocimiento, se convocará otra de los *acreedores, cuyos créditos hayan sido reconocidos*, para su graduacion,» citándolos por medio de cédulas.

El trámite mas importante del juicio de concurso es indudablemente aquel, en que se fija á cada acreedor el lugar que debe ocupar para el cobro de su crédito; pero como no seria justo conceder el derecho de determinar la preferencia á aquellos acreedores, cuyos créditos hayan sido escluidos, la ley solo lo dá á los *acreedores reconocidos*. Los que no lo hayan sido, esto es, los que reclamen créditos que han sido escluidos por acuerdo de la junta, ó por determinacion del juez en su caso, no podrán asistir á la junta de graduacion, ni tomar parte en sus deliberaciones, ni deben ser citados para ella: este derecho solo lo tienen, como se ha dicho, los acreedores, cuyos créditos hayan sido reconocidos por la junta ó por el juez, sin que puedan ser privados de él por el hecho de haber sido impugnados los acuerdos que á ellos se refieran: los que se hallan en este caso, conservan

(1) Art. 25 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861.

todos los derechos de acreedores reconocidos mientras no recaiga sentencia ejecutoria declarando la esclusion de sus créditos, y deben por tanto ser citados á la junta de graduacion. Tambien deben ser convocados á esta junta, y tienen derecho á concurrir á ella, los acreedores, cuyos créditos quedaron pendientes de reconocimiento en la anterior. De ellos debe tratarse en primer término, conforme á lo prevenido en el párrafo 2.° del art. 594: si se reconoce el crédito reclamado, entonces el acreedor á quien pertenezca, podrá tomar parte en las deliberaciones sobre graduacion; pero si fuere desechado, el acreedor, ó su representante, habrán de retirarse, puesto que no pueden tomar parte en los acuerdos de la junta.

Aun pueden ocurrir dos casos que merecen ser examinados. Es el primero, que los créditos desechados influyan esencialmente en la constitucion de las dos mayorías legales; y el segundo, que estén reclamados en su totalidad los acuerdos de la junta de reconocimiento. Si ocurriese lo primero, claro es que no podrá ser obstáculo para la junta de graduacion, pues, no pudiendo concurrir á ella los acreedores escluidos, es evidente que no deben tomarse en cuenta sus créditos, para determinar la mayoría de cantidades.

Y en el caso de que hayan sido impugnados en su totalidad los acuerdos de la junta de reconocimiento, por haberse constituido y deliberado ilegalmente, ó por otro motivo, tampoco se suspenderá la marcha del juicio de concurso, que no debe suspenderse en ningun caso: se celebrará á su tiempo la junta de graduacion, para verificar la de los créditos reconocidos, tomando parte en ella los acreedores, á quienes pertenezcan dichos créditos, sin perjuicio del resultado definitivo de la impugnacion. Sin embargo, las reclamaciones pudieran ser de tal importancia y trascendencia, que conviniese á los mismos acreedores reconocidos esperar en definitivo resultado, antes de proceder á la graduacion de créditos, y en este caso los interesados en el concurso podrán de comun acuerdo aplazar la celebracion de la junta de graduacion, hasta que sean firmes todos los acuerdos de la de reconocimiento y las determinaciones del juez en su caso.

Ya hemos dicho que á la junta de graduacion solo deben ser convocados personalmente los acreedores, cuyos créditos hayan sido reconocidos por la junta ó por el juez, aunque se haya presentado impugnacion contra ellos, y los que quedaron pendientes de reconocimiento en la junta anterior. Esta citacion ha de hacerse por medio de cédulas (art. 591), en la misma forma que para las anteriores; y sin perjuicio de ella, para dar la conveniente publicidad al acto, á fin de que, llegando á noticia de los acreedores morosos, puedan hacer uso de su derecho, dispone el propio art. 591, que «se anunciarán además el dia, hora y sitio en que la junta deba verificarse, en los periódicos oficiales, ó de avisos si los hubiere, y cuando el juez lo considere conveniente, en la *Gaceta de Madrid*.» Para hacer la designacion del dia, el juez deberá tener presente que entre la citacion y la celebracion de la junta, deberán mediar 15 dias, por lo menos.

Para ilustrar á la junta de graduacion y facilitar sus deliberaciones, la ley impone á los síndicos la obligacion de hacer préviamente la clasificacion de los créditos. A este fin ordena el art. 592, que dentro de los 30 dias mencionados, esto es, los 15 que se conceden para impugnar los acuerdos de la junta de reconocimiento, y los otros 15 para convocar y celebrar la de graduacion, formarán los síndicos cinco estados, además de la nota de los bienes, que no pertenezcan al deudor, de que luego hablaremos, cuyos estados comprenderán:

«El primero, los acreedores por trabajo personal y por alimentos. Si se tratare de un ab-intestato ó testamentaría concursada, añade el propio artículo para aclarar las dudas á que se prestaba la antigua legislacion, se colocarán en este lugar, y tendrán derecho preferente á cualquiera otro, los acredores por los gastos de funeral, proporcionado á la fortuna y circunstancias del finado, y por los ocasionados con motivo de la ordenacion de su última voluntad, y formacion de inventario y diligencias judiciales, á que haya dado lugar la testamentaría ó ab-intestato.

»El segundo, los hipotecarios legales, *segun el órden establecido por derecho.*

»El tercero, los que lo sean por contrato, *segun su antigüedad.*

»El cuarto los escriturarios.

»El quinto los comunes.»

Por mas que la ley de Enjuiciamiento civil, como adjetiva, no haya querido poner la mano en la parte del derecho civil, que se refiere al órden y prelacion de los acreedores, es lo cierto que, al determinar los estados de graduacion, que deben presentar los síndicos, no se limitó á prevenirles que presentasen los que correspondieran con arreglo á las leyes; sino que los reasumió en cinco diferentes clases, introduciendo en algunas de ellas, justas, pero verdaderas innovaciones, y dando á las leyes sustantivas un órden y claridad que antes no existía.

Pero no basta, para que los síndicos puedan desempeñar su cometido, todo el buen deseo que en ellos debe suponerse, y toda la claridad que la ley de procedimientos ha dejado consignada: es necesario determinar, qué créditos deben ser colocados en cada estado; y esta determinacion, que, segun la espresion de un célebre publicista, constituye un grave y espinoso deber para la sindicatura, debe hacerse con conocimiento perfecto de las prescripciones del derecho civil y por persona perita en la ciencia.

Ya en el tomo primero de esta obra, artículo **ACREEDORES**, se espuso la doctrina aplicable á cada uno de ellos, segun el estado que la legislacion tenia antes de la publicacion de la de Enjuiciamiento civil; pero las disposiciones de esta ley, las innovaciones esenciales introducidas por la Hipotecaria, y las declaraciones de la jurisprudencia, han introducido modificaciones importantes, que es necesario tener presentes para hacer con acierto la graduacion de los créditos en un concurso. El método rigoroso de la ENCICLOPEDIA no nos permite tratar aquí esta materia, que debemos reservar para sus artículos respectivos. Además del de *Acreedores* antes citado, véanse **CRÉDITOS** (*Graduacion de*): **HIPOTECA**, en sus diferentes artículos.

Los cinco estados antedichos deberán estenderse en el papel sellado, que corresponda á la cuantía del concurso, y suscribirse por todos los síndicos. Si estos discordaren sobre algun punto, cada uno presentará su opinion sobre el caso de la discordia, para que la junta acepte y apruebe la que crea mas conforme á derecho.

La ley de Enjuiciamiento civil, despues de determinar los estados, que deben presentarse á la junta de graduacion, dice (artículo 593) que «por separado formarán los síndicos nota de los bienes de cualquiera clase, que el concursado tuviere en su poder, correspondientes á terceras personas, con espresion de los nombres de los dueños. Si los dueños se hubieren presentado reclamándolos, se les entregarán, conviniendo en ello los síndicos y el concursado; si alguno no conviniere, se sustanciará la reclamacion en ramo separado y vía ordinaria.» La ley, por medio de este precepto, ha venido á resolver una de las cuestiones, que mas dividieron á los antiguos prácticos, sobre si el dueño de una cosa podia ser considerado como acreedor de dominio, respecto de la misma; ó si, por el contrario, las palabras *acreedor* y *dueño* eran absolutamente incompatibles. Sobre este punto puede verse lo que hemos dicho en la pág. 383 del tomo 1.° párrafo 1.°, seccion 3.ª del artículo **ACREEDORES**.

Los síndicos no pueden presentar un estado de acreedores de dominio, porque la ley no los reconoce como tales acreedores; pero debiendo limitarse los efectos legales del concurso á los bienes del deudor, es claro que los que no lo sean, no pueden ser objeto de dicho juicio. La nota que han de formar y presentar, deberá comprender:

1.° Los bienes dotales y parafernales, que se conserven en especie en poder del deudor, de los que fueron aportados por su mujer al matrimonio, segun se infiere de las leyes 7 y 17, tít. 11, Part. 4.ª, y 33, tít. 13, Partida 5.ª

2.° Cualquiera especie de bienes y efectos que se hubieren dado al concursado en depósito, comodato, administracion, arrendamiento, alquiler ó usufructo, segun las leyes 1.ª, título 1.°; 5.ª y 9.ª, tít. 2.°; 5.ª, tít. 8.°; 12, título 14, Partida 5.ª, y otras.

3.° Los bienes vendidos á pagar de contado, cuyo precio no se hubiera satisfecho. (Ley 9, tít. 5, Partida 5.ª)

Y 4.° Los bienes de cualquier otra clase, que el concursado tuviera en su poder, correspondientes á terceras personas.

Cuando, acerca de la procedencia de alguno de estos bienes, haya conformidad entre los síndicos y el concursado, se acordará su devolucion, con los frutos que hayan producido, por el principio de derecho de que los frutos de una cosa corresponden á su dueño. Si se resistiere la devolucion por los síndicos y por el deudor, ó por cualquiera de ellos, el dueño de la cosa, que indebidamente se haya incluido entre los bienes del concurso, tendrá el derecho de promover una demanda ordinaria con todas las formalidades de la misma, menos la conciliacion, que producirá los efectos de una tercería de dominio, y por consiguiente tambien el que los bienes reclamados no se enajenen hasta que quede ejecutoriada dicha reclamacion.

Convocada la junta de graduacion, se reunirá en el dia y hora señalados, bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano. Se principiará la sesion por la lectura de todos los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil, relativos á la graduacion de créditos y á la impugnacion de los acuerdos de los acreedores respecto á este punto, que son los comprendidos desde el 591 al 603 inclusive. Se pasará á deliberar ante todo sobre el reconocimiento de los créditos, que hayan podido quedar pendientes, respecto á cuya justificacion deberán los síndicos presentar dictámen por escrito. Se dará despues cuenta de los estados de graduacion, y se pondrán á discusion los créditos que comprendan. Terminada esta discusion, se someterá á votacion el dictámen de los síndicos, respecto á cada crédito, quedando aprobado lo que determinaren las mayorías de votos y cantidades, combinadas en la forma establecida en el art. 511 para los convenios de quita y espera. Así lo ordena el art. 594.

La ley ha adoptado, respecto de esta junta, la misma forma que la que debe guardarse en la de reconocimiento. El escribano levantará acta de todo cuanto ocurra en la misma junta, que deberán suscribir el juez y todos los concurrentes.

Como en esta junta debe presentarse dictámen sobre los créditos, que quedaron pendientes de reconocimiento en la anterior, y aun sobre los presentados despues, hasta la misma junta de graduacion, esta comenzará resolviendo sobre los dictámenes presentados, y despues se procederá á la discusion en general, sobre los estados formados por la sindicatura, á fin de no hacer interminable dicho acto; y discutidos en la forma que la ley establece, se irá votando con separacion sobre cada uno de los créditos comprendidos en dichos estados. Téngase presente que en estas votaciones pueden tomar parte los acreedores reconocidos en la propia junta; pero no los que hayan sido escluidos. Y para el caso de no reunirse las dos mayorías de votos y cantidades sobre algun crédito, el art. 595 previene, que «llamará el juez los autos á la vista y determinará lo que crea conforme á derecho sobre el crédito que haya dado lugar á la disidencia.» Se establece el mismo procedimiento que para igual caso respecto del reconocimiento de créditos: véase por tanto lo que al tratar de este hemos dicho anteriormente.

Impugnacion de los acuerdos sobre graduacion. Afectando los acuerdos de la junta de graduacion al derecho de los acreedores, y consistiendo algunas veces el cobrar, ó no, los créditos reconocidos, en el lugar que se obtenga para el pago, la ley (art. 596) resuelve, que «los acuerdos de estas juntas, como igualmente las determinaciones que los jueces dictaren, en los casos en que no se reunieren las dos mayorías, pueden ser impugnados dentro de ocho dias, desde su fecha, por los acreedores reconocidos, no concurrentes á las mismas juntas, ó que hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo.» Esta disposicion es enteramente igual á la establecida para impugnar los acuerdos de la junta de reconocimiento, por lo que puede verse lo que hemos dicho anteriormente sobre este punto.

Las causas en que la impugnacion puede

fundarse, serán todas aquellas que se refieran á la naturaleza del crédito graduado, y por consiguiente al derecho del acreedor. El término para formalizarla es de ocho dias, desde la fecha de la junta ó de la determinacion del juez en su caso, cuyo término deberá contarse desde el dia siguiente á la fecha, como está prevenido para todos los términos judiciales. Dicho término es improrogable, pues el artículo 597 declara que «pasados los ocho dias, no se dará curso á ninguna impugnacion contra los acuerdos de la junta ó decisiones del juez.»

«Sobre cada una de las impugnaciones se formará ramo separado, si son diferentes los créditos impugnados. Se sustanciarán en via ordinaria, y los síndicos deberán sostener el acuerdo de la junta. Si un mismo acreedor impugnare varios acuerdos, ó varios acreedores un mismo acuerdo, se sustanciarán todas estas oposiciones en un mismo ramo, y siempre con los síndicos. El acreedor, cuyo crédito sea objeto de la impugnacion, puede en union de los síndicos y bajo una misma direccion, sostener lo acordado respecto á él. En estos ramos separados no será el deudor admitido como parte» (arts. 598, 599, 600 y 601.) Este procedimiento es tambien igual al establecido para sustanciar la oposicion á los acuerdos de la junta de reconocimiento, sin otra diferencia que la de que el deudor, que puede ser parte en dicha oposición, no puede serlo en la de que ahora tratamos; y la razon es, porque, así como tiene un interés directo y principal en el reconocimiento de los créditos, no puede ya tenerlo despues de reconocidos, y debe serle indiferente la preferencia de los mismos.

Indicarémos, por último, que aunque previene la ley se forme un ramo separado para cada impugnacion, si son diferentes los créditos, esto es en el supuesto de que así convenga para mayor claridad, y de que puedan resolverse las impugnaciones con independencia unas de otras. Si no existe esta independencia; si para graduar los créditos impugnados es necesario compararlos entre sí, en el espíritu de la misma ley está que todas estas impugnaciones se sustancien en un mismo ramo ó pieza de autos. En todos estos juicios proceden todos los trámites y recursos que la ley tiene establecidos para el juicio ordinario.

Pago de los créditos. «Pasados los ocho dias señalados para la impugnacion de los acuerdos de las juntas de graduacion, sin haber sido impugnados, se procederá al pago de los créditos por el órden establecido, espidiendo los oportunos mandamientos contra el depositario de los fondos para que se verifique. Al entregar estos mandamientos al acreedor, se le recojerá el documento de reconocimiento, que se le facilitó por los síndicos, el cual, con los títulos que haya presentado de su crédito, se unirá á esta pieza, estendiéndose nota espresiva de quedar cancelado á consecuencia del pago mandado hacer. Si hubiere impugnacion á alguna ó algunas graduaciones, se retendrá el importe de los créditos á que se refieran, hasta que recaiga sobre ellas ejecutoria, y las sumas retenidas se aplicarán segun su resultado.» Así lo disponen los arts. 602 y 603.

La pieza 2.ª del juicio de concurso, que comenzó por el reconocimiento y graduacion de los créditos, termina por el pago de los mismos, lo cual supone que han de existir fondos bastantes para realizarlo; porque si no existiesen, celebrada la junta de graduacion, deberá continuarse certificacion, con referencia á la pieza 1.ª, del estado económico del concurso, y el juez, despues de repartir los dividendos, que permitan los fondos, y segun se vayan recaudando, tendrá que declarar en suspenso el pago, hasta que exista posibilidad de realizarlo. La forma de efectuar éste es una verdadera cancelacion de los documentos, que acreditan el derecho del acreedor; y claro es, que recogidos estos y unidos á la pieza 2.ª, ésta queda legalmente terminada: pero esto no podrá tener lugar mientras no se realice el pago por completo.

Como pudiera suceder, y no es raro el caso, que, contra los acuerdos de las juntas de reconocimiento y graduacion, existan reclamaciones pendientes, cuando se haya de verificar el pago, se ha establecido que el importe

de ellas se retenga en depósito, hasta que recaiga ejecutoria; lo cual es justo y conveniente. Aunque el art. 603, que así lo dispone, se refiere sólo á las impugnaciones de los acuerdos de graduacion, deberá entenderse lo mismo respecto de los créditos que se hallen pendientes de reconocimiento, por existir la propia razon, y porque así lo dispone tambien, para un caso análogo, el art. 581 de la misma ley, como lo ordenó espresamente el 1130 del Código de comercio. Las cantidades retenidas por estos conceptos deberán depositarse en la Caja de depósitos, y cuando se terminen los pleitos se les dará la inversion que corresponda.

El hecho del pago á los acreedores reconocidos, no estingue el derecho de cualquiera otro que no hubiese reclamado, y á este propósito no es inoportuno recordar que, segun sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Marzo de 1858, segun las doctrinas anteriores á la nueva ley de Enjuiciamiento civil, aunque la sentencia de graduacion causa todos sus efectos en cuanto á los créditos contenidos en ella, y al lugar ó grado fijado á cada uno, no estingue el derecho al pago de cualquiera otro no reclamado; sino que únicamente perjudica al derecho de prelacion que tuviera, si se hubiese invocado en tiempo oportuno. En el dia, los acreedores que se encuentran en este caso, están sujetos á las disposiciones que vamos á esponer en el párrafo que sigue.

§. 10. *Acreedores morosos.*

Entre las disposiciones relativas al reconocimiento de créditos, se hallan en la ley de Enjuiciamiento civil las que determinan los derechos y las penas de los *acreedores morosos*, reputando como tales á todos los que no se han personado en los autos de concurso, á reclamar sus créditos, dentro de los plazos señalados por la ley. Las reclamaciones, que tales acreedores deduzcan, tendrán precisamente por objeto el reconocimiento y graduacion de sus créditos: pertenecen, por tanto, á la pieza 2.ª del concurso, en la que deberán sustanciarse, aunque en ramos separados, como lo ha dispuesto la misma ley; y por eso tratamos dicha materia en este lugar, antes de pasar á esponer los procedimientos, correspondientes á la pieza 3.ª

En las disposiciones, de que tratamos, la ley ha procurado conciliar los derechos adquiridos, y realizados ya por los acreedores, que comparecieron en tiempo oportuno, con los que corresponden á los morosos para reclamar el pago de sus créditos. No seria justo privar á estos de su derecho; pero justo es tambien respetar los hechos consumados legalmente. Por esto, en todo caso obliga la ley al acreedor moroso, á que acepte el juicio en el estado en que lo halle, y á que respete los pagos realizados á los demás acreedores, porque hechos están á parte legítima, y le impone aun otras penas, segun sea mas ó menos escusable su morosidad.

Y es justa tambien esta diferencia. La morosidad podrá ser voluntaria ó involuntaria. El que incurre en la primera; el que, con conocimiento de los llamamientos judiciales, deja de comparecer al juicio de su propia voluntad, debiera ser privado, en pena de su rebeldía, de todo derecho, en cuanto pudiera perjudicar al de los demás acreedores, que, respetando y obedeciendo dichos llamamientos, acudieron al juicio en tiempo oportuno. Pero no merecen ese rigor los que no hacen uso de su derecho, impedidos por fuerza mayor, ó por no haber llegado á su noticia la formacion del concurso; antes bien, los que por estas causas incurren en morosidad involuntaria, deberian ser respetados en todos sus derechos, sin incurrir en pena de ninguna clase.

Aunque esto seria lo justo, daria lugar á contiendas largas y costosas, y á justificaciones difíciles de apreciar, como lo son todas las que se refieren á hechos, cuya mayor ó menor gravedad depende de la intencion del indivíduo. Por tal consideracion, sin duda, la ley ha prescindido de toda discusion sobre este punto, y partiendo del supuesto de que, cuanto mas lejos se hallan los interesados del lugar del juicio, mayores serán las dificultades para comparecer, y aun para tener noticia de los llamamientos del tribunal, ha adop-

tado la residencia como única base para determinar los efectos de la morosidad. A dicho fin ha clasificado en tres grupos los acreedores morosos, dando á cada clase diferentes derechos é imponiéndoles distintas penas.

En el primer grupo estan comprendidos los *acreedores residentes en territorio español de la Península, en las posesiones españolas de Africa y en las islas Baleares.* Estos incurren en morosidad, para todos los efectos legales de la misma, que luego espondremos, cuando no han comparecido en el juicio, antes de que se termine la junta de acreedores, que tiene por objeto el reconocimiento de los créditos. Desde el momento en que queda terminada dicha junta, han de ser considerados como morosos los que, teniendo su residencia en los puntos antedichos, y siguiéndose el juicio en cualquiera de los mismos puntos, no se hayan personado en él, hasta entonces, con los títulos justificativos de sus créditos (art. 579). De todos los morosos, estos son los tratados con mayor rigor, pues solo se les permite, hasta la *junta de reconocimiento*, comparecer sin incurrir en pena alguna, cuando los del segundo grupo pueden hacerlo hasta la *junta de graduacion.* Se supone que aquellos tienen más facilidad que estos, para enterarse de los edictos convocando á los acreedores, y para comparecer en el juicio.

En el segundo grupo se comprenden los *acreedores que residan en las islas Canarias.* Cualquiera que sea la forma, en que hayan sido convocados, cuando el juicio se siga en la Península ó en las islas Baleares, no incurrirán en morosidad los acreedores residentes en Canarias, hasta despues de celebrada la junta de graduacion (art. 582). Siempre que comparezcan antes de celebrarse y concluirse esta junta, no incurren en pena alguna, y en ella se deliberará sobre el reconocimiento de sus créditos, prévio informe de los síndicos; pero si comparecen mas tarde, quedan sujetos á las mismas penas, que los del primer grupo que lo verifican despues de la junta de reconocimiento. Por identidad de razon deberá observarse lo mismo, respecto de los acreedores residentes en la Península y Baleares, cuando el juicio se siga en Canarias; y entonces, los que residan en estas islas, estarán sujetos á las reglas establecidas para los del primer grupo.

Y por último, componen el tercero los *acreedores residentes en las provincias de Ultramar, ó en cualesquiera otros paises*, que no sean de los designados anteriormente: esto es, todos los que residan en las provincias españolas de Ultramar y en el estranjero. Ninguno de ellos incurre en pena alguna, aunque comparezca despues de celebrada la junta de graduacion, en consideracion, sin duda, á que se aumenta la presuncion de que no han tenido antes noticia del concurso, ó no han podido comparecer. Al ordenarlo así el art. 583, establece los derechos que corresponden á dichos acreedores y la forma de ejercitarlos, sin perjuicio de los adquiridos y realizados ya por los que comparecieron anteriormente. «Si se presentaren en adelante, dice dicho artículo, deberán ser reconocidos sus créditos, si son legítimos, y graduados por providencia que se dicte, oyendo á los síndicos y al concursado, en ramo separado; conservarán la preferencia, que pueda corresponder á sus créditos, y serán reintegrados en el lugar que se les señale. Pero en ningun caso se podrá obligar á los demás acreedores á que devuelvan lo que legalmente tuvieren recibido. Si fueren graduados sus créditos de comunes, se les igualará con todos los de la misma clase; y hecho esto, concurrirán á prorata con ellos á participar del haber del concurso, que esté aun por dividir.»

Segun esta disposicion, que es clara y terminante, los acreedores residentes en Ultramar y en el estranjero, conservan en todo caso íntegros sus derechos, hasta los de hipoteca ó preferencia, sin otra limitacion que la de no poder obligar á los demás acreedores á que devuelvan lo que tuvieren ya recibido á cuenta de sus créditos, de suerte que nunca incurren en las penas ó efectos de la morosidad. Si comparecen antes de las juntas de reconocimiento y graduacion, en ellas serán reconocidos y graduados sus créditos, y figurarán en el juicio como los demás acreedores; pero si comparecen despues, tienen que reclamar el reconocimiento y graduacion de su

crédito, por medio de una demanda ordinaria, que se sustanciará en ramo separado con los síndicos y el deudor, por todos los trámites y recursos del juicio ordinario, si estos se oponen al reconocimiento ó á la graduacion solicitada. Aunque la ley solo dá intervencion en este juicio á los síndicos y al deudor, no podrá negarse al acreedor ó acreedores á quienes pueda perjudicar directamente la reclamacion, si bien deberán litigar unidos á la parte, que sostenga su misma pretension.

Presentada la demanda de un acreedor de dicha clase, si bien deberán pagarse las sumas correspondientes á los acreedores, graduados en lugar preferente al que él pretenda, el juez habrá de disponer que se retengan en depósito los demás fondos del concurso hasta en cantidad suficiente para cubrir el crédito, que aquel reclame, si es preferente; ó para que se iguale con los demás de su misma clase, si es comun; y hecho esto, concurrirá á prorata con los demás á percibir lo que le corresponda; pero quedando su parte depositada hasta que recaiga sentencia ejecutoria. Si esta le es favorable, se le entregarán los fondos depositados que le pertenezcan; y si fuese escluido su crédito, volverán dichos fondos á la masa del concurso, para distribuirlos entre los acreedores, que á ellos tengan derecho.

Respecto de la *residencia*, debemos advertir que la ley se limita á la mera residencia, sin exigir que á ella vaya unido el domicilio ó la vecindad. Pero aquella deberá ser real y positiva, y desde la fecha, en que se hizo la declaracion del concurso y se anunció por edictos, pues de otro modo seria ocasion de abusos. Y como la residencia en Ultramar y en el estranjero, y tambien en Canarias, atribuye á los acreedores las ventajas, que quedan espuestas, deberá justificar cumplidamente en el juicio dicha circunstancia el acreedor que se proponga utilizar el beneficio, que en su virtud le concede la ley.

Veamos, por último, cuáles son los *efectos legales de la morosidad*; pero advirtiendo que estos efectos no son aplicables en ningun caso á los acreedores residentes en Ultramar y en el estranjero; pues ya hemos visto que estos se rigen por una disposicion especial; sino solamente á los que residen en el territorio español de la Península, en las posesiones españolas de Africa, ó en las islas Baleares, que comparezcan despues de la junta de reconocimiento, y á los de las islas Canarias, que lo verifiquen despues de la junta de graduacion: siempre en el supuesto de que el juicio se sigue en la Península, ó en las Baleares. Segun el art. 580 de la propia ley de Enjuiciamiento civil, los efectos legales de la morosidad son:

1.° «Que el que haya incurrido en ella, costee el reconocimiento de su crédito, si lo solicita con posterioridad.» Este reconocimiento habrá de practicarse en ramo separado, con audiencia de los síndicos y el deudor, dictando el juez la resolucion que estime justa; y si aquellos se oponen, se seguirá el juicio por la vía ordinaria. En este último caso no creemos deban ser de cargo del acreedor moroso todos los gastos del pleito; á no ser que sea condenado en costas. La ley solo le impone la obligacion de costear el reconocimiento de su crédito, lo cual debe limitarse al espediente necesario para justificarlo, y seria injusto cargarle las costas, ocasionadas por una oposicion, acaso inmotivada y temeraria.

2.° «Que pierda cualquiera prelacion, que pueda corresponderle.» El acreedor hipotecario ó privilegiado queda reducido á la clase de comun, en pena de su morosidad, y hasta sin derecho á los dividendos repartidos entre los demás acreedores comunes.

3.° «Que pierda la parte alícuota, que pudiera haberle correspondido en cualesquiera dividendos, hechos antes de su presentacion, no teniendo derecho á participar mas que de los que se ejecuten en adelante.» El objeto de esta disposicion no puede ser otro que respetar el derecho adquirido por los demás acreedores, para que no se les pueda obligar á devolver lo recibido, ni aun á cesar en la percepcion de dividendos, hasta que se iguale con ellos el acreedor moroso; ventaja concedida solamente á los residentes en Ultramar y el estranjero. Por esto creemos que, al condenar la ley al acreedor moroso á que pierda la parte alícuota, que pudiera haberle

correspondido en los dividendos, hechos antes de su presentacion, es con relacion á los demás acreedores; pero no respecto del deudor, porque esto no seria justo. El acreedor moroso percibirá la parte alicuota, que le corresponda en los dividendos, que se repartan despues de su presentacion, sin derecho á igualarse con los demás acreedores; pero si despues de haber cobrado estos por completo, quedasen fondos, tendrá derecho á que se le entreguen hasta completar el pago de su crédito.

Hemos dicho que los acreedores morosos tienen derecho á participar de los dividendos que se ejecuten, desde el dia de su presentacion; mas no deben percibirlos hasta que sea reconocido su crédito. Así lo dispone el artículo 581, á cuyo fin ordena, que, si entre la presentacion y el reconocimiento se repartiere algun dividendo, serán comprendidos en él dichos acreedores; pero reteniéndose en depósito las sumas que les correspondan, las cuales serán entregadas á los tenedores de los créditos, cuando sean reconocidos; y si no lo fueren, acrecerán á la masa del concurso.

Concluirémos esta materia, indicando que las penas y efectos de la morosidad son aplicables solamente á los acreedores que incurren en ella; no á los dueños de bienes, que obraban en poder del deudor, y por esto fueron incluidos en el embargo. Tales bienes podrán reclamarse en cualquier tiempo, en que, con arreglo á las leyes, tenga el dueño espedito el ejercicio de la accion reivindicatoria, en la plenitud de los efectos de esta.

§. 11. Pieza 3.ª—*Calificacion del concurso. Responsabilidad criminal del concursado, en su caso.*

A semejanza de lo dispuesto por la ley mercantil en los juicios de quiebra, pero con las modificaciones que aconsejaba la esperiencia, la ley de Enjuiciamiento civil reformó de una manera esencial la tramitacion del juicio de concurso de acreedores, estableciendo la pieza 3.ª, que tiene por objeto su calificacion. Dicho objeto, segun la respetable opinion de uno de los autores de la ley, no es el castigo del delincuente, si lo hay: esto no es, no puede ser propio de un juicio civil, ni por lo tanto de una ley, que á los de esta clase únicamente se refiere: su objeto es poner en descubierto si hay ó no amaños, si existen ó no delitos; en una palabra, declarar si es ó no fraudulento el concurso, para que esta declaracion y sus antecedentes, puedan servir, en su caso, de fundamento y base á una causa criminal.

Para conseguir este resultado, se reunen todos los datos, que pueden ser útiles, á fin de dejar consignadas las causas por que el deudor llegó al estado de concurso: se oye al mismo deudor; y se declara su inculpabilidad, ó se adoptan las determinaciones que exija la justicia. Esta investigacion puede ser un medio saludable para que la moral pública no sea ofendida, y acaso se eviten, en parte, esas estafas en grande escala, que desgraciadamente se ven en los concursos de acreedores, por temor á la inquisitiva cierta, que ha de verificarse de la conducta económica del deudor. Como esas consideraciones tienen aplicacion, siempre que procede la declaracion de concurso, resulta, que la pieza 3.ª deberá instruirse y sustanciarse, bien se trate del concurso voluntario, bien del necesario.

Segun los arts. 604 y 605 de la ley de Enjuiciamiento civil, «hecho el nombramiento de los síndicos, se les entregará la pieza 1.ª de los autos, donde se hallan la relacion, estado y memorias presentados por el deudor, para que dentro de treinta dias, y prévio el exámen de sus libros y papeles, manifiesten en esposicion razonada y documentada, el juicio que hayan formado del concurso y sus causas. Con testimonio literal de la relacion, estado y memoria presentados por el deudor, y la esposicion razonada de los síndicos original, se formará la pieza 3.ª; y acumulada á ella provisionalmente la 1.ª, se pasará todo al promotor fiscal del juzgado, para que, si encontrare algun delito ó falta, los persiga con arreglo á las leyes.»

Aunque esta dispone que hecho el nombramiento de los síndicos, se les entregará la pieza 1.ª, para que cubiertas las formalidades que prescribe, pueda formarse la 3.ª, esto deberá entenderse, cuando se haya cumplido lo

dispuesto en el art. 549, es decir, despues de hecha la entrega por inventario de los bienes, libros y papeles del concurso; pero si aconteciese que el deudor no tenga bienes, papeles ni libros, ó que no ha querido ó no ha podido presentar la relacion de deudas y la memoria de las causas del concurso, entonces no habrá necesidad de esperar una entrega, que no puede realizarse, y la pieza 1.ª se comunicará á los síndicos inmediatamente despues de su nombramiento.

El término para presentar la esposicion, que determina el art. 604, es, por su naturaleza, prorogable, y así en efecto conviene que sea, para precaver el caso, tan frecuente en los juicios de concurso, de que por falta de los antecedentes, que la ley exige, no pueda formarse el juicio de las causas del mismo. Cuando esto acontezca, deberá aguardarse á que, por la presentacion de los acreedores, se puedan conocer los actos del deudor y juzgarse de su culpabilidad ó inocencia. De todos modos, el hecho de no facilitar el deudor los datos, que la ley le ordena, siempre deberá hacerse constar, para apreciar su conducta, pues ese hecho revelaria ya que no procede de buena fé.

La esposicion razonada y documentada, que deben presentar los síndicos, ha de ser la historia de los hechos, á que se ha debido la declaracion del concurso, redactada con toda la claridad posible, estendida en el papel sellado, correspondiente á la importancia del juicio, y en la cual se proponga la inculpabilidad del concursado, si resultase que llegó al estado de concurso por desgracias é infortunios, que no pudo evitar, ó por otras causas no debidas á malicia ó mala fé; ó la declaracion de su culpabilidad, si resultára que habia cometido alguna de las acciones penadas por la ley. Antes de proponer los síndicos las conclusiones de su esposicion razonada, deben consultarlas con el letrado que dirija los negocios del concurso; y en caso de duda, optarán por la irresponsabilidad, porque la intervencion del ministerio público garantiza que no ha de quedar impune cualquier delito ó falta, que haya podido cometerse; y no es ciertamente la mision de la sindicatura constituirse en acusador del deudor.

Dentro del juicio de concurso no podrá exigirse la responsabilidad criminal al concursado, hasta que se haya formado la pieza 3.ª; pero cuando el deudor se haya alzado, ó cometido cualquier delito público, entonces su averiguacion y castigo puede iniciarse desde luego, con independencia del juicio de concurso, porque la accion de la justicia no debe entorpecerse, cuando no hay duda de la existencia de una accion penada por la ley.

Presentada por los síndicos la esposicion razonada y documentada, que ha de iniciar la pieza de calificacion del concurso, y testimoniados la relacion, estado y memoria presentados por el deudor, y los demás antecedentes y datos, en que se haya fundado dicha esposicion, se pasará todo al promotor fiscal, con la pieza 1.ª, acumulada á la 3.ª provisionalmente, para que emita su dictámen. Si este fuera conforme al de los síndicos, y favorable al concursado, el juez mandará traer los autos á la vista, y podrá, si así lo estima, declarar la inculpabilidad del concursado, ó adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones, que crea convenientes á la administracion de justicia. Si fuese diverso del de los síndicos, y favorable al concursado, se dará audiencia á éste, y con vista de todo, el juez procederá en los términos espresados. Y si el dictámen del promotor fuere contrario al concursado, sea conforme ó diverso del de los síndicos, se procederá con arreglo á derecho, y segun la índole del delito ó falta que resultare (arts. 606, 607 y 608).

La ley ha previsto los tres casos probables, en la apreciacion del ministerio público, esto es, que opine de la misma ó diversa manera que los síndicos, pero en sentido favorable al concursado; ó que su dictámen sea contrario á este; y en todos ellos establece un procedimiento diverso, que conviene señalar. En el primer caso, el juez podrá declarar, si así procede, la inculpabilidad del concursado, ó adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones, que estime convenientes á la administracion de justicia; de manera que, aunque exista la conformidad de opinion de los síndicos y del promotor fiscal, el juez no está

obligado á seguirla; sino que debe pronunciar la resolucion que estime justa, porque lo contrario equivaldria á privarle de su natural criterio.

En el segundo caso, esto es, cuando exista diversidad de pareceres entre la sindicatura y el ministerio público, opinando aquella por la responsabilidad y este por la inculpabilidad, entonces la ley concede al concursado una audiencia, para que pueda impugnar la calificacion propuesta por los síndicos, y el juez, en vista de todo, resolverá lo que estime procedente, como en el caso anterior. Nada dice la ley acerca del término para dicha audiencia, ni si deberá admitirse la prueba, que ofrezca el concursado, para justificar su inculpabilidad, y la que puedan proponer los síndicos en sentido contrario; prueba que autoriza para un caso igual el art. 1142 del Código de comercio. Teniendo en consideracion este precedente, la conveniencia de esclarecer los hechos para los fines de la justicia, y sobre todo, que se trata de un verdadero incidente del juicio de concurso, que ha de sustanciarse en la misma forma que los del juicio ordinario, segun prescripcion terminante del párrafo 2.° del art. 631, creemos que la audiencia ha de ser por seis dias, como en estos incidentes, y que procederá el recibimiento á prueba, con los trámites y recursos que para los mismos están autorizados por los arts. 342 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Y si el promotor fiscal fuese de dictámen de que debe procederse criminalmente, por existir una accion ú omision penada por la ley, de cuyo delito ó falta sea responsable el concursado, que es el caso tercero, entonces, cualquiera que haya sido el parecer de los síndicos, no puede el juez prescindir de acordar que se proceda criminalmente, conforme á derecho y á la índole del delito ó falta que se denuncie, sin audiencia prévia del concursado, como no debe oirse en ningun caso al tratado como reo en ese estado del juicio criminal, que es el de sumario: media la denuncia hecha por el ministerio público de un hecho punible, y es preciso proceder á la averiguacion cumplida de la existencia de ese hecho y de su autor: despues podrá el juez sobreseer, ó absolver ó condenar, oyendo al procesado, segun estime procedente.

Esto mismo lo confirma el art. 610 de la propia ley de Enjuiciamiento, en el cual se fija la naturaleza especial de la pieza 3.ª «No se podrá imponer, dice, ninguna pena al concursado, sin oirlo en forma; y desde el momento que estime el juez haber lugar á proceder contra él por cualquier clase de delito ó falta, se acomodará la sustanciacion de esta pieza al órden de proceder establecido para el juicio criminal.» De consiguiente, la providencia que el juez debe dictar en la pieza 3.ª, en vista del dictámen fiscal, será, segun los casos, ó declarar la inculpabilidad del concursado, dando por terminada esta pieza, cuya providencia será apelable en ambos efectos; ó que hay méritos para proceder contra él criminalmente, acordando lo demás que estime procedente para ello. En tal caso la misma pieza 3.ª servirá de base al procedimiento, quedando la 1.ª en la escribanía á disposicion de los interesados, y se acomodará aquel, en cuanto á sustanciacion y competencia, á las reglas establecidas para los procedimientos criminales. Si se trata de una falta, se pasará la pieza 3.ª ó el tanto de culpa al juez municipal competente; y lo propio se hará si se trata de un delito, cuyo conocimiento corresponda á otro juez, que no sea el del concurso. En estos casos, luego que haya ejecutoria, deberá remitirse testimonio de ella al juez del concurso para que obre en él los efectos consiguientes.

No satisfecha la ley con la iniciativa, concedida á los síndicos para exigir al concursado la responsabilidad, en que haya podido incurrir; ó proclamar su inculpabilidad, concede tambien igual derecho á los acreedores, ordenando en el art. 109, que «todos los acreedores tienen derecho á personarse en esta pieza y perseguir al concursado: si alguno ó algunos lo hicieren y sus gestiones tuviesen igual objeto que las de los síndicos, deberán litigar unidos y bajo una misma direccion: si fuere diverso el objeto de sus gestiones, litigarán separadamente.» Como el derecho de acusar es público, no podia ne-

garse á ninguno de los acreedores; pero llevado el legislador de su propósito de simplificar el procedimiento, establece, que todos los que sostengan unas mismas pretensiones deben litigar unidos bajo una misma representacion.

Réstanos examinar, cuáles son los hechos penados espresamente por la ley, con relacion al concurso, que pueden imputarse al concursado, y la pena que corresponde á cada uno de ellos. El Código penal de 1848, reformado en 1850, solo contiene dos artículos, relativos concretamente á esta materia. En el 443 dispuso, que el que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, fuese castigado con la pena de presidio menor, si fuere persona no dedicada habitualmente al comercio, pues á los comerciantes los castigaba con mayor rigor; y en el 448, que «el deudor no dedicado al comercio, que se constituya en insolvencia por ocultacion ó enajenacion maliciosa de sus bienes, será castigado: con la pena de arresto mayor, si la deuda escede de 5 duros y no pasa de 100; y con la de prision correccional, si escediere de 100 duros.»

El nuevo Código penal reformado, y mandado plantear provisionalmente por la ley de las Córtes Constituyentes de 17 de Junio de 1870, ha sido mas esplícito y circunstanciado en definir los diferentes delitos, que pueden cometer los concursados no comerciantes, tratándolos con mas severidad que el Código anterior. Sobre este punto contiene las disposiciones siguientes:

«Art. 536. El que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, será castigado con las penas de presidio mayor, si fuere comerciante; y con la de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio, si no lo fuere.

»Art. 542. Incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, el concursado, no comerciante, cuya insolvencia fuere resultado en todo ó en parte de alguno de los hechos siguientes:

1.° Haber hecho gastos domésticos ó personales escesivos y descompasados con relacion á su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia.

2.° Haber sufrido en cualquiera clase de juego pérdidas que escedieren de lo que por vía de recreo aventurase, en entretenimientos de esta clase, un padre de familia arreglado.

3.° Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas ú otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa esclusivamente del azar.

4.° Haber enajenado, con depreciacion notable, bienes cuyo precio estuviere adeudando.

5.° Retardo en haber dejado de presentarse en concurso, cuando su pasivo fuere tres veces mayor que su activo.

»Art. 543. Incurrirá en la pena de presidio correccional en su grado máximo, á presidio mayor en su grado mínimo, el concursado, no comerciante, cuya insolvencia fuere resultado en todo ó en parte de alguno de los hechos siguientes:

1.° Haber incluido gastos, pérdidas ó deudas supuestas, ú ocultado bienes ó derechos en el estado de deudas, relacion de bienes ó memorias que haya presentado á la autoridad judicial.

2.° Haberse apropiado ó distraido bienes ajenos, que le estuvieren encomendados en depósito, comision ó administracion.

3.° Haber simulado enajenacion ó cualquier gravámen de bienes, deudas ú obligaciones.

4.° Haber adquirido por título oneroso bienes á nombre de otra persona.

5.° Haber anticipado, en perjuicio de los acreedores, pago que no fuere exigible sino en época posterior á la declaracion de concurso.

6.° Haber distraido, con posterioridad á la declaracion en concurso, valores correspondientes á la masa.

»Art. 544. Es aplicable á los dos anteriores artículos la disposicion contenida en el 539. (Este art. 539, dispone lo siguiente: «En los casos de los dos artículos precedentes, si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegase al 10 por 100 de sus respectivos créditos, se impondrán al quebrado las pe-

nas inmediatamente inferiores en grado á la señalada en dichos artículos. Cuando la pérdida escediere del 50 por 100, se impondrán en su grado máximo las penas señaladas en los dos mencionados artículos.»)

»Art. 545. Serán penados como cómplices del delito de insolvencia fraudulenta, cometida por el deudor, no dedicado al comercio, los que ejecutasen cualquiera de los actos siguientes:

1.° Confabularse con el concursado para suponer crédito contra él, ó para aumentarlo, alterar su naturaleza ó fecha, con el fin de anteponerse en la graduacion, con perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verificare antes de la declaracion del concurso.

2.° Haber ausiliado al concursado para ocultar ó sustraer sus bienes.

3.° Ocultar á los administradores del concurso la existencia de bienes, que perteneciendo á este, obren en poder del culpable, ó entregarlos al concursado y no á dichos administradores.

4.° Verificar con el concursado conciertos particulares, en perjuicio de otros acreedores.

»Art. 546. Las penas señaladas en este capítulo se impondrán en su grado máximo al medio, al quebrado ó concursado, que no restituyere el depósito miserable ó necesario.»

Tales son los hechos, que el nuevo Código penal define y castiga como delitos, de los que puede cometer el concursado, con relacion al concurso. Pero si resultare haber cometido alguna otra defraudacion, que no sea de las antedichas, ó cualquier otro hecho, penado por el mismo Código, como delito ó como falta, deberá tambien ser objeto del procedimiento criminal contra el concursado, para exijirle la responsabilidad, en que haya incurrrido, bien en la misma pieza 3.ª, si tiene relacion con el concurso; bien en ramo separado, si no la tiene, librándose en este caso para ello testimonio del tanto de culpa.

§. 12. *Conclusion del juicio: rehabilitacion del concursado.*

Aunque el resultado definitivo del concurso debe hacerse constar y notificarse en la pieza 1.ª, como esto no puede ejecutarse sino despues de terminadas las otras dos piezas y todos sus incidentes, el buen método exigia que tratáramos de ello en último lugar, por ser las actuaciones con que se cierra el juicio; y por esto lo hemos reservado para el presente párrafo, que es el último de la seccion que trata *del concurso necesario*, separándonos del órden, que en la esposicion de esta materia ha seguido la ley de Enjuiciamiento civil.

Luego que esté terminado el juicio, con todas sus incidencias, debe el juez dictar un auto en la pieza 1.ª, mandando se haga saber á los acreedores el resultado definitivo del concurso. Veamos el estado en que debe hallarse cada una de las tres piezas, para poder dictar dicha providencia.

En la pieza 1.ª debe constar la aprobacion de la cuenta general, rendida por los síndicos, despues de pagados los acreedores. En la 2.ª, el pago de los créditos, por el órden en que hayan sido graduados, con espresion de si han sido satisfechos por completo, ó de la parte proporcional, que haya recibido cada acreedor, hasta donde haya alcanzado el producto de los bienes. Y en la 3.ª debe haberse hecho la declaracion de culpabilidad ó inculpabilidad del concursado.

En tal estado las tres piezas, y terminados tambien los incidentes de las mismas, pues de otro modo no podrian tener tal estado, las llamará el juez á la vista, y dictará en la 1.ª el auto. antes indicado, declarando terminado el juicio, y mandando se notifique y publique el resultado definitivo del concurso, y que hecho, se archiven los autos, verificándolo con los libros y papeles del concursado, á los efectos sucesivos, en el caso de no haber sido pagados por entero los créditos. Segun el art. 570, dicha notificacion ha de hacerse «á los acreedores reconocidos, por medio de cédula, que se dejará en sus habitaciones respectivas,» entregándola al mismo interesado, si fuese habido; y no hallándolo, á su mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos, como se hacen las notificaciones de esta clase; y la publicacion se hará insertando la cédula en los mismos periódicos, en que se

hubiere publicado la declaracion del concurso. Esa cédula, para que llene su objeto, deberá contener, además del auto antedicho, una sucinta relacion ó resúmen de los créditos pagados por completo, y de la parte proporcional, ó tanto por ciento, que se haya distribuido á los demás: espresion de si el concursado ha sido ó no declarado culpable, y aun tambien el resúmen del producto líquido de los bienes, y de lo distribuido á los acreedores, segun la cuenta aprobada de los síndicos.

Rehabilitacion del concursado. El art. 571 de la propia ley de Enjuiciamiento civil dispone, que «en el auto en que se ordene la publicacion del resultado definitivo del concurso, se declarará la rehabilitacion del concursado, sin necesidad de instancia suya, ni de audiencia de ningun género, *en el caso de haber sido pagados por entero los créditos y de haberse declarado la inculpabilidad del mismo concursado.*» Nótense bien estas dos circunstancias, que han de concurrir conjuntamente. Si no han sido pagados por entero todos los créditos reconocidos; y aun en el caso de haberlo sido, si no se ha declarado la inculpabilidad del concursado, no puede decretarse su rehabilitacion, aun cuando se allanen á ella todos los acreedores; pero si no se ha procedido contra aquel criminalmente, y han sido pagados por entero los créditos, lo cual resultará de las piezas 2.ª y 3.ª, entonces el juez está obligado á decretar la rehabilitacion: y ha de hacerlo de oficio, en el mismo auto, en que declare terminado el concurso, sin necesidad de instancia del interesado, y caso de hacerla, sin dar audiencia á los síndicos, ni á nadie. No se ha de instruir en ningun caso el espediente, que por circunstancias especiales exige la ley mercantil para la rehabilitacion de los quebrados.

De lo dicho se deduce que, cuando el concurso ha sido solamente de quita y espera, y siempre que se haya revocado el auto de declaracion de concurso, como no llegó á decretarse en aquel caso, y se alzó en este la interdiccion civil, no hay tampoco necesidad de declarar la rehabilitacion del concursado. No sucederá lo mismo en los casos de *convenio* de quita ó espera ó de otra clase, celebrado durante el juicio de concurso: entonces es necesaria la rehabilitacion, porque medió la interdiccion, y no podrá acordarse aquella, si no se justifica el cumplimiento íntegro del convenio, en razon á que, sin este requisito no puede estimarse realizado el pago. Así lo dispone para las quiebras el art. 1172 del Código de comercio, que citamos, como en otros puntos del presente tratado, no porque sus disposiciones sean aplicables, ni aun como supletorias, á los concursos comunes; sino por la autoridad y justicia de su doctrina, y por la analogía de los casos.

Cuando no se haya podido decretar la rehabilitacion del concursado, al terminarse el juicio, por no haber sido pagados los créditos por entero, ó porque hubiera causa pendiente para exijirle la responsabilidad criminal, podrá suceder que despues desaparezcan estos inconvenientes con el pago ó la absolucion. En tales casos podrá el concursado solicitar su rehabilitacion, y el juez, llamando á la vista los antecedentes, y sin dar audiencia á nadie, deberá decretarla, siempre que aquel justifique cumplidamente haber completado el pago de los créditos reconocidos en el concurso, ó que ha sido absuelto en la causa. Esta providencia deberá notificarse y publicarse en la misma forma indicada anteriormente.

En virtud de la rehabilitacion cesan todos los efectos de la declaracion de concurso, relativos á la persona del concursado: recobra éste, por tanto, la libre administracion de sus bienes y es reintegrado en el ejercicio de todos los derechos, de que fué privado por aquella declaracion. Puede ya contratar y obligarse libremente, y ejercer los cargos públicos, para que le incapacitaba legalmente el estado de concursado (1), como si éste no hubiera existido.

(1) Segun los arts. 110 y 771 de la ley provisional, sobre organizacion del poder judicial, de 15 de Setiembre de 1870, no pueden ser nombrados jueces, ni magistrados, ni individuos del ministerio fiscal, *los concursados, mientras no sean declarados inculpables*. De suerte que podrán ser nombrados para dichos cargos los concursados declarados inculpables, aun cuando no puedan

SECCION VI.

DEL CONVENIO.

El juicio de concurso, ya voluntario, ya necesario, comienza desde el momento, en que el juez, ya á instancia del deudor, ya á peticion de los acreedores, declara á aquel en estado de concurso. Desde que tal declaracion se hace, el deudor queda privado de la libre administracion de sus bienes, y para contratar de nuevo con los acreedores, era necesario que la ley le declarase en aptitud de realizarlo. En efecto, el art. 611 de la de Enjuiciamiento civil, á semejanza de lo dispuesto para el procedimiento de quiebra por el artículo 1147 del Código de comercio, declara, que «en cualquier estado del juicio de concurso pueden hacer los acreedores y el concursado los convenios que estimen oportunos;» y sancionando esta misma doctrina, el Tribunal Supremo de Justicia declaró, en sentencia de 4 de Enero de 1839, que en los concursos necesarios están autorizados los acreedores para hacer los convenios y adoptar los acuerdos que juzguen más útiles y beneficiosos á sus intereses, siempre que en ellos no contraríen á las leyes.

La razon de la anterior prescripcion legal, segun la ilustrada opinion de uno de los autores de la misma ley es, que los negocios particulares pueden arreglarse á satisfaccion de los que en ellos tienen interés. No corresponde á la autoridad judicial limitar este derecho: cada uno es árbitro de sus bienes, y las acciones ó la facultad, que hay para reclamar lo que se nos debe, es una parte de nuestra fortuna.

La anterior regla general, de que en cualquier estado del juicio pueden hacerse y admitirse por todos las propuestas de convenio, tiene una limitacion justa, basada en la moral y en la justicia: siempre que el promotor fiscal, los síndicos ó cualquier acreedor, hayan pedido que se declare fraudulento el concurso, no podrá hacer el deudor convenio ninguno con sus acreedores, hasta que haya recaido ejecutoria, desestimando dicha calificacion (art. 614). Cuando esto ocurre, el hecho afecta á la moral pública, y su persecucion y castigo no debe entorpecerse por la accion individual. Sobre el interés de los particulares, está el interés de la moral, de la justicia y del órden público: mientras hay pendiente una cuestion criminal, se subordina á ella, hasta cierto punto, la civil: de otro modo la proposicion de convenio seria frecuentemente el medio de eludir la responsabilidad criminal, amortiguando ó estinguiendo el celo de los que se hubieran lanzado á la acusacion, y presentando al concursado como hombre de la mejor buena fe, cuando sus acreedores, hasta los mas tenaces antes en perseguirlo, habian convenido en una proposicion, que no hubieran aceptado, si lo tuvieren por delincuente.

La ley no determina en qué pieza del concurso deba presentarse y sustanciarse la solicitud de convenio; pero, ó esta se formaliza antes de la subdivision del juicio, ó despues que se hayan formado las tres piezas, de que debe constar todo concurso. En el primer caso, la solicitud de convenio se sustanciará y decidirá en las diligencias, en que se haya decretado la declaracion de concurso; en el segundo, parece lo mas natural, que se sustancie y resuelva en la pieza 2.ª, que es donde deben constar los créditos reclamados y su naturaleza respectiva; y no en las piezas 1.ª y 3.ª, que tienen por la ley un objeto especial y determinado. De todos modos aquella solicitud nunca será motivo para detener la ejecucion de las medidas, adoptadas para el embargo y depósito de los bienes, ocupacion de libros y papeles, retencion y exámen de la correspondencia, que segun el art. 533 deben llevarse á efecto, á pesar de la oposicion del deudor á la declaracion del concurso; porque, si no se entendiera así, los deudores de mala fé tendrian una arma poderosa para dilatar la ejecucion de las medidas preventivas.

Dice el artículo 612 de la propia ley, que «el juez accederá á toda solicitud, que se

ser rehabilitados por no haber sido pagados por entero los créditos. Nos parece que esto es incompatible con la dignidad y decoro de la magistratura.

le dirija por el deudor ó por cualquier acreedor, para convocacion á junta, que tenga por objeto el convenio, siempre que el que la dedujere *pague* los gastos á que dé lugar.» El deber, no de ofrecer, sino de pagar los gastos, á que dé lugar la junta para tratar del convenio, es una garantía de que no se deducirán solicitudes maliciosas, con el objeto de suspender la tramitacion del juicio de concurso; y como la ley no esceptúa á nadie de este deber, habrán de cumplirlo hasta los que estén declarados pobres para litigar. Aunque la ley no lo dice, será conveniente que el juez mande hacer al actuario una regulacion prudencial, y exija préviamente la consignacion de su importe, ó la garantía de una persona abonada, como para igual caso lo exige el art. 1150 del Código de comercio.

«La convocacion de junta, para tratar de convenio lleva consigo la suspension del juicio de concurso, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas (art. 613).» Esta es una cuestion prejudicial á todas las demás, y si así no se hubiera establecido, habria podido acontecer, que cuando se reuniera la junta, fuesen ya inoportunas las proposiciones de convenio, y solo se hubiesen causado gastos inútiles.

«La convocacion de la junta se hará por cédulas, que se dirigirán á los acreedores reconocidos, si tal fuere el estado del concurso, y por edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los periódicos oficiales y de avisos del pueblo, si los hubiere, en el *Boletin* de la provincia, y si el juez lo creyere conveniente, en la *Gaceta de Madrid*. En estas cédulas y anuncios se hará espresion del objeto de la junta, y se señalarán el dia, hora y sitio, en que haya de celebrarse. Entre la convocatoria y la celebracion de la junta deberán mediar á lo menos 15 dias: el juez podrá ampliar este término hasta treinta, si las circunstancias del concurso lo exigieren.» Así lo ordenan los arts. 615 y 616 de la citada ley de Enjuiciamiento civil. El sistema de publicidad para la convocacion de la junta, en que debe discutirse y resolverse la solicitud de concurso, es el mismo, que se ordena para la celebracion de las demas juntas, que deben tener lugar en el juicio de concurso, y basta con tener por reproducidas aquí las observaciones consignadas anteriormente. Los arts. 615 y 616 se refieren, no obstante, al caso, en que haya tenido lugar la junta de reconocimiento de créditos, porque solo entonces pueden existir *acreedores reconocidos*, y á estos es á quienes debe entregarse la cédula de convocacion, haciendo constar la entrega en forma legal.

Sin embargo, la proposicion de convenio puede hacerse antes de celebrarse la junta de exámen y reconocimiento de créditos, y esto es lo que más frecuentemente acontece, en cuyo caso prescribe el art. 617, que se dará cuenta de la proposicion en la misma junta, sin necesidad de convocar ninguna otra, y solo decidirán en ella sobre la admision ó desestimacion de las proposiciones de convenio, los acreedores cuyos créditos sean en ella reconocidos. La razon que la ley ha tenido para establecerlo así, en el art. 618, es, segun el autor de sus motivos, «por que, siendo las mismas personas las que han de reunirse para una y para otra junta, con la celebracion de una sola se evitan dilaciones, viajes, incomodidades y dispendios;» razon que tendrá cabida siempre que la solicitud de convenio se deduzca antes de que los créditos sean reconocidos. En este caso la convocacion por cédulas se hará á los acreedores, que se hayan personado en los autos, y por edictos para todos los demás.

Antes de tratarse de las proposiciones de convenio, en tales casos, constituida la junta, comenzará á discutirse la legitimidad de los créditos de los acreedores, que á ella concurran; y solo los que sean reconocidos, podrán admitir ó desestimar las proposiciones de convenio. No ha dicho la ley las condiciones, que han de guardarse para dicha admision prévia de los acreedores; pero entendemos que será aplicable lo dispuesto en el art. 576, el cual no hace mas que repetir la regla general, que debe observarse en las votaciones de toda junta, que tenga lugar en el juicio de concurso. Así en efecto lo determina el art. 619, al declarar que «la mayoría, que haya de decidir sobre el convenio, se constituirá en la for-

ma provenida en el art. 511.» Si hecha la convocacion, no llegaran á reunirse las tres quintas partes del total pasivo del concurso, ó las proposiciones no reunieran en la votacion las dos mayorías legales, de número y cantidad, el convenio se considerará desechado y seguirá adelante la sustanciacion del juicio.

Cuando las proposiciones de convenio se presenten en la primera junta general, convocada para el nombramiento de los síndicos, se procederá en la forma, que hemos espuesto en el párrafo 7.° de la seccion anterior, al tratar de este punto.

Determinada la forma, en que debe ser convocada la junta, para tratar del convenio propuesto, y los efectos legales de la convocacion misma, la ley previene en el art. 620, que la mujer del concursado no podrá tomar parte en la junta, en que se trate del convenio. Lo mismo tenia declarado el art. 1154 del Código de comercio, y la razon de una y otra prohibicion fácilmente se comprende. La mujer casada vive bajo el poder del marido y legalmente son considerados como una misma entidad jurídica: es menester evitar que se pongan en pugna los intereses de la mujer con los del marido: cuando sucede esto, el resultado inevitable es, ó que la mujer haga abdicacion de todos sus derechos y hasta de las mas fundadas esperanzas á favor de sus hijos, ó que tenga que arrostrar las consecuencias de su conducta independiente: consecuencias, que muchas veces son el ódio, la venganza y los tratamientos irregulares, ó inhumanos del marido. La ley, pues, protege á las mujeres contra su propia debilidad, y hasta evita que su fortuna pueda quedar comprometida por la aceptacion de unas proposiciones perjudiciales ó ruinosas; y de esta suerte, los acreedores no pueden tampoco verse perjudicados por el voto de otra persona, que, aunque acreedor, debe considerarse subyugada por el deudor mismo.

Pudiera acontecer que la mujer hubiere fallecido, cuando se celebre la junta, para tratar de las proposiciones de convenio: si tal aconteciese, dejando herederos forzosos, que habian de estar sujetos por la ley á la patria potestad del deudor, consideramos aplicable á aquellos la prohibicion legal; pero si la mujer hubiese instituido herederos á personas estrañas, creemos que estas no estarian incapacitadas para tomar parte en las votaciones de la junta.

La misma ley, en su art. 621, hace una declaracion importantísima, que ha dado lugar á empeñados debates en los tribunales. «Los dueños de cualesquiera bienes, dice, que tenga en su poder el concursado, y los acreedores que con arreglo á lo que queda determinado, deban ser comprendidos en los estados 1.°, 2.° y 3.°, de que habla el art. 592, no quedan ligados á lo convenido entre el deudor y sus otros acreedores, si se abstienen de tomar parte en la votacion. Si no se abstienen, quedan sujetos como todos los demás.» Esta prescripcion es igual á la establecida en el artículo 511 para los convenios de quita y espera, y forma el sistema adoptado, de no obligar á los acreedores por trabajo personal y por alimentos, á los hipotecarios legales y á los que lo fueran por contrato, del mismo modo que á los dueños de cualesquiera bienes, que tuviera en su poder el concursado, cuando no tomaron parte en la votacion, á pasar por su resultado. Lo contrario equivaldria á que los acreedores, que por no gozar preferencia alguna tienen un derecho eventual al cobro, impusieran su voluntad á los que, sin necesidad del convenio, ni de renunciar en parte á su derecho, tienen asegurada la reivindicacion de lo que es suyo, ó el cobro de sus preferentes créditos; y sobre todo, quedaria anulada la preferencia, que la ley concede á los acreedores privilegiados é hipotecarios. Estos, en tanto pueden ser perjudicados en sus derechos, en cuanto tengan voluntad de renunciarlos; y esta renuncia la presume la ley, no absteniéndose de tomar parte en las votaciones, por que si se abstienen, no quedan ligados á lo convenido entre el deudor y sus otros acreedores.

Llegado el dia señalado para la junta, esta debe celebrarse bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano. «Principiará por la lectura de todas las disposiciones de la ley, relativas al convenio entre el deudor y sus acreedores, y se dará despues cuen-

ta de todos los antecedentes del concurso y de su estado, con inclusion del que tenga la pieza tercera. Se pondrán en seguida á discusion y votarán nominalmente las proposiciones, que se hubieren presentado. Hecha la votacion, se estenderá un acta, que firmarán todos los concurrentes.» El artículo 622, que así lo previene, supone que la junta se realiza cuando hay ya acreedores reconocidos; pero como puede tener lugar antes de la junta de reconocimiento, segun los artículos 617 y 618, claro es que, cuando esto acontezca, antes de ocuparse de las proposiciones de convenio y de todo cuanto á las mismas se refiere, deberán llenarse las formalidades ordenadas en los arts. 573, 576 y 577 de la misma ley para deliberar sobre el reconocimiento de los créditos.

«Si las proposiciones fueren desestimadas, dice el art. 623, continuará el juicio de concurso;» y el 624, que «si las proposiciones fuesen aprobadas, se publicarán por edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los diarios del pueblo, si los hubiere, ó en el *Boletin* de la provincia, y en la *Gaceta de Madrid*, si en ella se hubiere publicado la convocatoria. Tambien se comunicará por circular de los síndicos, de que quedará copia en los autos, á todos los acreedores reconocidos, que no hayan concurrido á la junta.» Ninguna dificultad ofrecen estas disposiciones, porque claro es, que desde el momento en que las proposiciones de convenio son desechadas, queda alzada la suspension del juicio de concurso, que produjo la convocacion de la junta, y este debe continuar en el estado que tenia, cuando dicha suspension se efectuó; pero si las proposiciones son admitidas, como el juicio de concurso debe considerarse legalmente terminado, entonces procede que las proposiciones aprobadas se publiquen por los medios ordinarios, y que se comuniquen por circular de los síndicos, de que quedará copia en los autos, á todos los acreedores reconocidos que no hayan concurrido á la junta, la cual, como hemos dicho antes, solo podrá producir efectos obligatorios para todos los que tomaron parte en la votacion, sean ó no preferentes, y en todo caso para los escriturarios ó comunes, aunque no hayan asistido á la junta, en que se aprobó el convenio.

Pudiera acontecer que, cuando dicha junta se celebre, existan pendientes algunos litigios sobre reconocimiento de créditos: á los acreedores, que se encuentren en este caso, deberá comunicárseles tambien la circular indicada en el art. 624. Si las proposiciones presentadas han sido aprobadas en parte, y rechazadas en otra, deberá atenderse para la continuacion ó ultimacion del juicio, á cuál de ellas constituye la parte principal del convenio, y si esta fué la aprobada, no podrá haber duda de que el concurso ha terminado.

A semejanza de lo que la ley habia ordenado respecto de los acuerdos de todas las juntas de acreedores, que tienen lugar en un concurso, se declara en el art. 625, que «dentro de los veinte dias siguientes al de la fecha de los edictos, podrá ser impugnada la decision de la junta por los acreedores reconocidos, ó que tengan reclamacion pendiente para su reconocimiento, que no hayan concurrido; ó por los que, concurriendo, se hubieren separado del voto de la mayoría y protestado que les quedara su derecho á salvo.» Este artículo, segun la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 26 de Mayo de 1859, deja á salvo el derecho del acreedor, que vota y protesta contra el convenio en el juicio de concurso, para formalizar su oposicion dentro de los veinte dias, que el mismo artículo señala. «Pasado el término referido, no podrá ser impugnada la decision por ningun acreedor residente en el territorio de la Península, en las posesiones españolas de Africa, ó en las islas Baleares. Los que residieren en las islas Canarias, que no hayan estado presentes en la junta, podrán impugnarla dentro de cuarenta dias, contados desde la fecha en que hayan sido publicadas las proposiciones de convenio. A los que residieren en las posesiones españolas de Ultramar ó en países estranjeros, que no hayan estado presentes en la junta, queda completamente á salvo su derecho, é íntegro contra el deudor, no obstante el convenio. Pasados los veinte ó cuarenta dias respectivamente, sin haberse formulado oposicion, se mandará, á instancia

de parte legítima, llevar á efecto lo convenido.» Así lo disponen los arts. 626 y 627 de la misma ley de Enjuiciamiento.

Al determinar la ley, en el art. 625, antes copiado, que el plazo que concede para impugnar la decision de la junta, se cuente desde *la fecha de los edictos*, no ha tomado en consideracion que dicho plazo podrá ser ilusorio para los acreedores en algunas ocasiones, puesto que no será posible estender los edictos y conseguir su insercion en los periódicos oficiales, sino despues de haber trascurrido muchos dias desde su fecha. Creemos que debe ser una errata de imprenta, ó de copia, en razon á que el art. 626 siguiente, hablando del mismo plazo, dice que se contará desde la *fecha de la publicacion* de los edictos; y esto es lo natural, y así deberá entenderse tambien en el primer caso. Sin embargo, para evitar perjuicios y cuestiones harán bien los jueces en procurar que la publicacion de los edictos subsiga inmediatamente á la fecha de los mismos.

El citado art. 625 estiende el derecho de reclamar, no solo á los acreedores reconocidos; sino á los que tengan reclamacion pendiente para su reconocimiento, que no hayan concurrido, por el interés que, aunque eventual, debe suponerse que les asiste. Tambien lo tendrán todos los acreedores, que, habiéndose separado del voto de la mayoría, protesten que les quedará su derecho á salvo, segun tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia, antes citada, de 26 de Mayo de 1859, porque no puede suponerse en el que así procede, la voluntad de conformarse con el acuerdo adoptado.

Las palabras *ningun acreedor*, de que usa el art. 626, dán á entender claramente que todos los acreedores, inclusos los privilegiados, que no reclamen en tiempo, deben estar y pasar por lo convenido. Los acreedores por trabajo personal y por alimentos, y los hipotecarios legales y por contrato, para no quedar ligados, tienen el medio sencillo de acudir á la junta y abstenerse de tomar parte en la votacion: si no lo hacen, ni impugnan el acuerdo de la junta, se supone la sumision tácita al mismo. Véase lo que hemos espuesto sobre esta propia cuestion al final del párrafo 2.° de la seccion IV, con relacion al convenio de quita y espera.

Los diversos plazos, que se conceden á los acreedores, para impugnar el convenio, segun las distancias de sus respectivas residencias, es una prescripcion justísima, que se encuentra en armonía con otras disposiciones de la misma índole, consignadas en la propia ley, y que por su claridad no necesitan esplicacion alguna. Cuando los plazos, concedidos por la ley, han trascurrido, sin que se haya formalizado oposicion, el acuerdo de la junta adquiere la eficacia de la cosa juzgada, y el juez debe mandar que se lleve á efecto, á instancia de parte legítima, que no pueden serlo mas que el deudor, ó cualquiera de los acreedores, y los síndicos en su caso. Contra el auto mandando llevar á efecto lo convenido, por no haberse utilizado el derecho de impugnacion, dentro del término improrogable que la ley concede, no creemos que deba admitirse reclamacion alguna.

Segun el art. 628, «las únicas causas, porque puede impugnarse el acuerdo de las juntas convocadas para tratar del convenio, son las señaladas en el art. 513, respecto á los acuerdos de quita y espera.» Véanse en dicho artículo, y lo que sobre ellas hemos espuesto en el párrafo 3.° de la seccion IV.

Ordena el art. 629, que «la impugnacion del convenio se sustanciará con el deudor y los síndicos en vía ordinaria, con las modificaciones espresadas en el art. 534, y litigando unidos y bajo una misma direccion los que sostengan las mismas pretensiones.» Dichas modificaciones son las establecidas para sustanciar la oposicion del deudor á la declaracion del concurso, á fin de abreviar los trámites del juicio ordinario; y como ya se espusieron en el párrafo 4.° de la seccion V, allí pueden verse. Contra la sentencia que recaiga procederán los mismos recursos que en el juicio ordinario.

Se dispone, por último, sobre esta materia, en los arts. 630 y 631 de la propia ley de Enjuiciamiento civil, que «si la impugnacion fuere desestimada por ejecutoria, se procederá á llevar á efecto el convenio:» y que «si fue-

re estimada, y se declarasen la nulidad ó ineficacia del convenio, continuará su marcha el juicio de concurso.» Estas son las consecuencias naturales de los fallos, que pueden recaer; pero no se llevarán á efecto en uno y otro caso, sino á instancia de parte legítima. Dichas disposiciones parten del supuesto de que, mientras se sustancie la impugnacion, han quedado, como deben quedar, en suspenso la ejecucion del convenio y el juicio de concurso.

Concluiremos indicando que el convenio deberá llevarse á efecto, en su caso, en la forma que hayan acordado los mismos interesados, ya estrajudicialmente, ya con la intervencion del juez, el cual dictará, á instancia de parte legítima, las providencias necesarias para su ejecucion. Y si hubiese sido declarado nulo ó ineficaz, podrá ratificarse en nueva junta, convocada para ello, subsanando los vicios de que adoleciere, ó hacerse nuevas proposiciones de convenio, lo propio que cuando sean desestimadas por la junta las hechas primeramente: la ley no ha establecido limitacion alguna sobre este punto.

SECCION VII.

ALIMENTOS DEL CONCURSADO.

En nuestro antiguo derecho no se encuentra disposicion alguna, que se refiera al otorgamiento de alimentos al concursado: los jueces, sin embargo, solian concederlos por equidad, benevolencia ó conmiseracion. De aquí el que no fuera uniforme la jurisprudencia sobre este punto, pues, dependiendo del arbitrio judicial, unas veces se concedian, y otras se negaban en idénticas circunstancias. La ley de Enjuiciamiento, aunque invadiendo algun tanto el terreno propio del Código civil, ha puesto término á esa arbitrariedad, dictando reglas para la concesion de alimentos al concursado, y determinando el procedimiento, que para ello ha de seguirse.

En cuanto á lo primero, teniendo sin duda en consideracion que todos los bienes del deudor deben destinarse al pago de los acreedores, hasta donde sean necesarios, y que aquel debe sostenerse de lo suyo, pues estos no tienen obligacion natural, ni civil, de alimentarlo, niega la ley todo derecho á los alimentos al deudor insolvente, y lo concede solo en el caso de que asciendan á mas los bienes, que las deudas.

Parece á primera vista que este sea un derecho ilusorio, sobre todo en el concurso necesario; pues no pudiendo tener lugar este concurso, sino cuando no se hayan encontrado bienes, libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir la cantidad reclamada ejecutivamente por alguno de los acreedores, es de presumir que no podrá ser atendida la reclamacion de alimentos. Sin embargo, puede haberse padecido error, al apreciar la importancia efectiva de los bienes del deudor; puede éste haber adquirido despues de la declaracion de concurso otros bienes, que hayan aumentado su activo; y no seria justo, que en estos casos ú otros semejantes, se le negara el derecho de atender á su precisa subsistencia, cuando el pasivo está suficientemente garantido.

Por estas consideraciones, el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone, que «si el concursado reclamare alimentos, el juez, atendidas las circunstancias, señalará los que crea necesarios, solo en el caso de que, á su juicio, asciendan á mas los bienes que las deudas.» No se hace distincion, como la hizo el Código de comercio, entre los deudores fraudulentos y los de buena fé, y se concede á todos indistintamente el derecho de pedir alimentos, porque no seria justo que, aun al deudor criminal, se le condenase á morir de necesidad, solo por el hecho de deber, cuando su activo sea mayor que el pasivo.

Son, pues, necesarios dos requisitos para que el juez pueda hacer el señalamiento de alimentos: 1.°, que los reclame el mismo concursado; y 2.°, que, á juicio del propio juez, asciendan á mas los bienes que las deudas. En cualquier estado del juicio podrá el concursado deducir dicha pretension, debiendo hacerlo por medio de procurador y con direccion de letrado, y habrá de fundarla necesariamente en que su activo es mayor, que el pasivo, alegando además las circunstancias

en que se halle y que abonen su pretension, pues ha de atenderse á todas ellas para concederle ó negarle lo que pida. Se formará ramo separado, y sin dar audiencia á los acreedores, ni á los síndicos, caso de que ya estén nombrados, y sin recibir el incidente á prueba, ni admitir otras justificaciones, que las que el concursado presente acaso con su solicitud, el juez acordará lo que estime justo, en vista de lo que resulte de la pieza 1.ª del concurso, y tambien de la 2.ª, si ya se hubiere formado, sobre la importancia de los bienes y de las deudas. La apreciacion de este punto lo deja la ley al juicio prudente del juez: si este estima que ascienden á mas los bienes que las deudas, otorgará los alimentos, en la cantidad, que crea justa y necesaria, atendiendo á las circunstancias del deudor y de su familia, y á la diferencia entre el activo y el pasivo, para no perjudicar á los acreedores; pero los negará, si á su juicio, las deudas ascienden á mas que los bienes.

En todo caso, la providencia del juez, concediendo ó negando los alimentos, tiene el carácter de interina, y es por tanto, inapelable, como lo declara el párrafo 2.º del propio art. 632. Ha de someterse este punto á la primera junta de acreedores, que se celebre, segun lo dispone el art. 633, la cual tiene ámplias facultades, como asunto que afecta á sus intereses, para acordar lo que mejor le parezca, y por esto, como es muy transitorio el perjuicio, que pueda causar la providencia del juez, no se concede contra ella recurso de ninguna clase: ha atendido á una necesidad perentoria, y debe llevarse á efecto, sin dilacion, lo que hubiere acordado, sin perjuicio de lo que resuelva despues la junta de acreedores.

En efecto, dicho art. 633 dispone, que «del señalamiento, hecho interinamente por el juez, se dará cuenta en la primera junta de acreedores que se celebre, la cual aprobará, modificará ó suprimirá los alimentos, atendiendo á las circunstancias y necesidades del concursado. Pero no podrá dejar de concederlos, cuando no aparezca claramente que los bienes no bastan á satisfacer las deudas.» No quiere la ley, para evitar gastos y molestias, que solo para tratar de la asignacion alimenticia se celebre junta de acreedores, y por lo mismo reserva este punto para la mas inmediata á la asignacion. Cuando esta junta se celebre, se dará cuenta en ella del señalamiento de alimentos, hechos por el juez, y poniéndolo á discusion, se deliberará sobre él, pudiendo aprobarlo, modificarlo en cuanto á la cantidad asignada, ó suprimirlo, atendidas las necesidades y circunstancias del concursado. Sobre este punto la junta de acreedores, tiene ámplias facultades: así como puede condonar parte de sus créditos, puede tambien conceder alimentos al concursado, por compasion ó por otros motivos, aunque el pasivo sea mayor que el activo, lo cual no puede hacer el juez. Solo se le impone una limitacion; la de no poder negar los alimentos, sino en el caso de que aparezca claramente que los bienes no bastan á cubrir las deudas: en caso de duda, se favorece al deudor, como lo exige la equidad.

Es de notar que al ordenarse en el citado art. 633, que se dé cuenta en la primera junta de acreedores del señalamiento de alimentos, hecho por el juez, nada se disponga para el caso, en que los haya denegado. No obstante tal omision, del espíritu de la ley se deduce que de la providencia denegatoria debe darse tambien cuenta en la primera junta, para que acuerde lo que estime procedente; y no puede ser otra cosa, atendida la declaracion hecha en el art. 632. Si, segun él, dicha providencia tiene el carácter de interina, y por esta razon es inapelable, no puede caber duda en que de ella ha de darse cuenta en la junta, para que la apruebe ó reforme: por eso se concede al concursado el derecho de reclamar en vía ordinaria contra el acuerdo de la junta, negándole los alimentos; y no contra la providencia del juez, que es interina y transitoria.

Tampoco ha determinado la ley, para este caso, la forma, en que hayan de tomarse los acuerdos de la junta, concediendo ó negando los alimentos; pero teniéndola establecida en el art. 511, al que se refiere en todos los demás casos, deberá observarse lo que en

él se dispone. De consiguiente, los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y cantidades, debiendo reunirse, para que la haya, las dos terceras partes del total pasivo del concurso. No reuniéndose estas dos mayorías, habrá de entenderse desestimada la peticion de alimentos.

«Contra el acuerdo de la junta, concediendo, ó negando alimentos, se oirá en juicio ordinario al deudor y á los acreedores, que quieran impugnarlo, si deducen su accion dentro de los ocho dias, despues del acuerdo. No podrán hacer esta impugnacion los concurrentes á la junta, á no ser que hayan votado contra el acuerdo de las mayorías, y protestado que les quede su derecho á salvo. El deudor, y los que lo apoyen, tendrán un solo procurador y una misma direccion en el juicio. Esto es aplicable á los que lo impugnen en un mismo sentido.» Tal es el testo claro y terminante del art. 654. Como acontece en todos los casos, en que se impugnan las decisiones de la junta, contra el acuerdo, relativo á los alimentos del concursado, se admiten reclamaciones, que tienen que sustanciarse en juicio ordinario, con todos sus trámites y formalidades, menos la conciliacion, de la que están esceptuadas todas las incidencias de los concursos. Esto tendrá lugar en el mismo ramo separado, que se haya formado por la reclamacion del deudor. Los ocho dias, que se conceden para formalizar la reclamacion, son improrogables.

La última disposicion de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre esta materia, tiene por objeto determinar lo que ha de hacerse respecto al abono de los alimentos, durante el juicio ordinario, en que ha de ventilarse la impugnacion á los mismos. Por razones de equidad y de justicia, á la vez, que son bien notorias, ordena á dicho fin el art. 655, que «mientras está pendiente el juicio de alimentos, no los tendrá el concursado, si el juez y la junta de acreedores hubieren estado conformes en negarlos: si el juez ó la junta los hubieren concedido, los percibirá; y si hubiere diferencia entre la cantidad fijada por aquel y por esta, se estará por la que la junta hubiere designado.» La razon de la preferencia que, en cuanto á la cantidad, merece la asignacion acordada por la junta, sobre la señalada por el juez, se funda, en que á nadie perjudica el aumento ó disminucion de la asignacion alimenticia, mas que á los acreedores, los cuales, al conceder mayor asignacion, que la hecha por el juez, dan pruebas de no querer angustiar al deudor; sino, por el contrario, dispensarle las consideraciones, que sean compatibles con sus esperanzas y su derecho.

Otorgada la asignacion de alimentos, esta se hará efectiva por medio de libramientos, espedidos por el juez contra los síndicos, ó el depositario, en su caso; y cuando estos no tengan en su poder fondos suficientes, mandará el juez se saquen del establecimiento, en donde se hallen depositados los del concurso, á fin de que se abonen los alimentos en la forma acordada por la junta; y si esta no la hubiese señalado, por mensualidades anticipadas, como lo ordena la ley, al tratar de los alimentos provisionales.

Quedan espuestas las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, relativas á la prestacion de alimentos en los concursos. Nótese que todas se refieren al concursado, y en el concepto de que pertenecen al mismo todos los bienes embargados, y por esto el disponer que, para concederle ó negarle los alimentos, se atienda solamente á si el activo es mayor que el pasivo. Pero puede suceder que entre esos bienes se hallen confundidos los dotales y parafernales de la mujer del concursado; y en tal caso, la razon capital de los alimentos no será la antedicha; sino el derecho que tiene la mujer á ser alimentada de sus propios bienes, pues con esta carga hace suyos los frutos el marido, como jeje de la sociedad conyugal. Y lo propio habrá de decirse respecto de los hijos. Por estas razones, la mujer y los hijos tienen, en tal supuesto, un derecho indisputable á los alimentos que la ley les concede, cuyo derecho podrán ejercitar por sí mismos, ó por medio del marido, como jefe de la familia.

Si el marido concursado reclama alimentos para su familia, en el concepto de que parte de los bienes embargados pertenecen á su mujer y á sus hijos, no podrá menos de ser

atendida esta reclamacion, aunque la razon no sea la que autoriza la ley de Enjuiciamiento civil para el caso concreto á que se refiere. Sin embargo, tal reclamacion deberá resolverse por los trámites y en la forma espuesta anteriormente. Pero si es la mujer, ó la representacion de los hijos, quien deduce la pretension, creemos que deberá sustanciarse, con arreglo á lo que previene la propia ley, en los arts. 1210 y siguientes, para los *alimentos provisionales*, puesto que esa es la regla general, y para este caso no ha dispuesto la ley otra cosa. Eso no obsta, para que en la primera junta de acreedores se dé cuenta de ello, á fin de que acuerde su conformidad, ó que se impugne por los síndicos, en la vía ordinaria, el señalamiento provisional de alimentos, hecho á favor de la mujer ó de los hijos del concursado.

SECCION VIII.

DECLARACION EN CONCURSO DE TESTEMENTARÍAS Y AB-INTESTATOS.

Toda testamentaría, como asimismo el *ab-intestato*, constituyen una personalidad jurídica, que asume todas las obligaciones y derechos del difunto, y tiene su representacion, mientras no se haya hecho la division y adjudicacion de los bienes. Puede dicha personalidad encontrarse en el mismo caso que los particulares, respecto al pago de deudas, esto es, que importen estas mas, que los bienes que haya dejado el difunto, ó que no puedan ser pagadas á su vencimiento, y por consiguiente pueden tambien hallarse en el caso de ser declarada en concurso de acreedores. Reconociéndolo así la ley de Enjuiciamiento civil, ha dispuesto en el art. 497, que «las testamentarías podrán ser declaradas en concurso, en los casos, en que proceda esta declaracion respecto á los particulares; y siéndolo, se sujetarán á las reglas establecidas para el juicio universal de concurso de acreedores.» Y lo propio ha de entenderse de los ab-intestatos, á los cuales es tambien aplicable esta disposicion, segun el art. 376 de la misma ley.

Conforme, pues, á ella, en cualquier estado del juicio de testamentaría, ó de ab-intesto, antes que se realice la adjudicacion de los bienes, podrán pedir los herederos, ó la representacion legal, la declaracion de concurso voluntario, ó hacer proposiciones de quita y espera, acompañando las relaciones de bienes y deudas del difunto y la memoria que para estos casos exije el art. 506; y tambien podrán los acreedores pedir la declaracion de concurso necesario, si concurren los requisitos, que para ello exije el art. 521. Estas solicitudes se deducirán en el mismo juicio de testamentaría ó ab-intestato, el cual se acomodará desde entonces al procedimiento establecido para el de concurso, que hemos espuesto en las secciones anteriores. Las medidas, que en aquellos se hayan adoptado, para la seguridad de los bienes, servirán para este, completándolas en lo que sea necesario.

Solo convendrá advertir, que para que proceda la declaracion en concurso, de las testamentarías y ab-intestatos, será necesario que los herederos hayan repudiado la herencia, ó que la hayan aceptado con beneficio de inventario. Si la aceptaron simplemente, quedaron obligados al pago de todas las deudas de su causante, las que deben satisfacer con sus propios bienes, si no bastan los de éste (1), y en tal caso la declaracion de concurso será del heredero, por su propia representacion; pero no de la testamentaría ó ab-intestato, que dejó de existir para ese efecto (2).

SECCION IX.

DEL CONCURSO DE ACREEDORES EN ULTRAMAR.

Rigiéndose en Ultramar el procedimiento por las mismas disposiciones que en la Península, era natural que en aquellos tribunales se notara la misma diversidad de prácticas y de jurisprudencia que en estos, con los mismos ó mayores abusos é inconvenientes, respecto á la sustanciacion de los concursos

(1) Ley 10, tít. 6, Part. 6.ª
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en competencia, de 1.º de Marzo de 1862.

de acreedores, que hemos indicado en la seccion I, al hacer la reseña histórica. Para corregirlos en lo posible, las Reales Audiencias, en uso de sus facultades, dictaron algunos *autos acordados*, dando reglas para la mas pronta y conveniente terminacion de estos juicios; pero como esas disposiciones no eran obligatorias sino en el territorio de la Audiencia respectiva, de aquí el que no sirvieran para uniformar la jurisprudencia en aquellas apartadas regiones.

Para cortar el abuso, que se habia introducido, de promover los deudores juicios de *espera*, con el objeto de impedir las ejecuciones, que contra ellos se promovian, el Gobernador, Capitan general de la isla de Cuba, de conformidad con el dictámen de una junta que nombró, para que le consultase lo conveniente, acordó en 28 de Junio de 1759, como medida general, que se circuló para su observancia, que el deudor que pretendiese espera de sus acreedores, se habia de presentar preso, y permanecer así hasta la conclusion del juicio: dar nómina de bienes y acreedores: que habia de constar la legitimidad de los créditos al tiempo de deliberarse sobre la moratoria, para que esta pudiese aprovechar; que en caso de oposicion, se mantendrian secuestrados los bienes, durante el juicio ordinario, que sobre ella habia de seguirse; y que deberian, sin embargo, seguirse las ejecuciones pendientes contra el mismo deudor al tiempo de solicitar la espera, sin permitirse la acumulacion, ni aceptarse competencias, á pretesto de perjuicio comun, pues este podia precaverse por el medio legal de tercerías, y la acumulacion, en virtud del derecho de atraccion, solo era procedente en los concursos, en que se trataba de pagar á los acreedores, segun el mérito de cada uno; y que concedido el beneficio de espera, podria servir de escepcion para los juicios ejecutivos, que se intentasen con posterioridad.

La Audiencia de Puerto-Príncipe dictó tambien sobre *esperas* un auto acordado en 23 de Octubre de 1807, declarando que no podian otorgarlas los jueces contra la voluntad de los acreedores, no pudiendo tener otra intervencion el oficio del juez en estos asuntos, que para la simple convocacion, hasta tanto que le constase que la mayor parte de los acreedores, en calidad y cantidad, habia concedido esa gracia al deudor comun; y que la citacion para la concurrencia de aquellos no merecia nombre de juicio, y mucho menos universal, que pudiese atraer á sí á los demás, que se hallaran pendientes en otros tribunales contra el deudor.

Se observaba tambien en Ultramar, como jurisprudencia, un auto acordado de la Audiencia de Guatemala, de 23 de Setiembre de 1771, por el que se dispuso, que luego de formarse un concurso, se nombrara un defensor del mismo, discerniéndole el cargo, prévia su aceptacion y juramento, para que con traslado de los autos, pidiera lo conveniente; que se le notificara y á los demás interesados, que dentro de tercero dia propusieran administrador para los bienes concursados, con apercibimiento de nombrarse de oficio; cuyo administrador debia prestar fianza y rendir cuenta anual; y que no se hicieran pagos fuera de concurso, á no ser de gastos de medicinas, enfermedad, entierro y costas, y de lo que permita el derecho, á fin de evitar el abuso de que, cobrando los mas poderosos y de mejor derecho, se hiciera interminable el concurso para los demás acreedores, que lo abandonaban por la incertidumbre del éxito.

El mas importante de los autos acordados sobre esta materia, es el que dictó la Audiencia pretorial de la Habana, en 24 de Febrero de 1840. En las instrucciones, que de Real órden le fueron comunicadas para su instalacion y organizacion, se le previno, que se ocupara muy principalmente en investigar los motivos, que hasta entonces habian retardado y estorbado la administracion de justicia en aquel territorio, y en cortar de raiz los abusos que se habian introducido en el modo de proceder, y que procurase introducir las mejoras que pudiera proporcionar el Reglamento provisional para la administracion de justicia, de 26 de Setiembre de 1838. En cumplimiento de este encargo, se dictó dicho auto acordado, el cual contiene varias reglas

para restablecer la puntual observancia de las leyes del Reino, y las buenas prácticas en la sustanciacion de los negocios civiles y criminales; y con relacion á los concursos de acreedores se ordenó lo siguiente:

«17. Cuidarán los jueces de no admitir por ningun título, cesion parcial de bienes, como desgraciada é ilegalmente se ha practicado en algunos casos, en perjuicio de los acreedores.

»18. La cesion de bienes ha de ser general de todos ellos, acompañándose los estados jurados con toda lealtad y exactitud; y el deudor tratante, no dando fianza adecuada, ha de ser reducido á prision, para responder de cualquier dolo, que haya podido cometer, por ser muy frecuentes las enajenaciones anticipadas en fraude de los acreedores.

»19. Los juicios de esperas no tendrán eficacia para suspender las demandas, que se sigan ó establezcan contra el deudor, en otros juzgados, hasta que, despues de la calificacion de bienes y deudas, recaiga la aprobacion judicial, y esta cause ejecutoria, si hubiere sido apelada.

»20. En los concursos no se extraerán fondos de la masa comun, para pago de derechos y costas judiciales, hasta su conclusion, en que se declararán las causadas de cargo de quien corresponda, satisfaciéndose, durante la sustanciacion, por las partes que promuevan los pleitos, recursos y diligencias, y las comunes por mitad.»

Y por otro auto acordado de la propia Audiencia de la Habana, de 9 de Enero de 1845, calificando de gravosa á las partes y perjudicial á la pronta y recta administracion de justicia, la práctica abusiva, introducida en aquel foro, de hacer intervenir la calificacion de letrados en los concursos de acreedores y juicios de espera, se acordó que, en lo sucesivo, se omitiera el nombramiento de tales letrados calificadores en los espresados juicios, cesando desde luego en su ministerio los que existiesen ya nombrados, sin perjuicio de los derechos que tuvieren devengados hasta la fecha.

Esto, en cuanto á procedimientos. Respecto de competencia, se declaró por Real cédula de 15 de Abril de 1771, que los militares no tenian fuero de atraccion en los concursos y demás juicios universales, y que debian seguir sus recursos, como los demás acreedores, ante la jurisdiccion ordinaria ó la que fuera competente para conocer del concurso. Y por la Real cédula de 30 de Enero de 1855, que reformó la administracion de justicia en las provincias de Ultramar, respetando disposiciones anteriores, sobre la jurisdiccion de Hacienda, que regian allí, lo propio que en la Península, se dispuso (art. 105), que los juzgados de Hacienda continuaran conociendo de los concursos y negocios en que sea parte el Estado; pero que una vez satisfecho el crédito de este, cesara dicho conocimiento, y se trasladase á la jurisdiccion ordinaria, ó á la que fuera competente.

Tal era el estado de la legislacion y de la jurisprudencia en Ultramar, respecto de los juicios de concurso, cuando, por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865, se mandó promulgar en las islas de Cuba y de Puerto-Rico la ley de Enjuiciamiento civil, que rige en la Península, para que comenzara á regir en aquellas provincias el dia 1.° de Julio de 1866. Desde entonces los juzgados y tribunales de dichas islas, cesando en las prácticas y procedimientos arbitrarios é irregulares, que hacian interminables los concursos, han tenido que sujetarse en la sustanciacion de los mismos á las reglas, claras y terminantes, establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil. De consiguiente, debe observarse en el dia, en los territorios de Cuba y Puerto-Rico cuanto hemos espuesto en las secciones precedentes del presente artículo, con las ligeras modificaciones consignadas en la Real instruccion de la propia fecha, de 9 de Diciembre de 1865: modificaciones exigidas por la diferente índole y circunstancias de los territorios; pero que en nada afectan al procedimiento, y mas bien deben considerarse como aclaraciones de sentido comun, para evitar dudas en la aplicacion de la ley.

Y con efecto: en el art. 17 de la citada instruccion se dice, que «siempre que las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento se refieren al territorio de la Península, se entende-

rá que hablan del de cada una de las islas de Cuba y Puerto-Rico, y sus agregadas respectivas.» En virtud de esta disposicion sucederá, lo que naturalmente habia de suceder; que los acreedores residentes en la Península tendrán en los concursos, que se rigan en dichas islas, los mismos derechos y consideraciones, que se guardan en los que se siguen en la Península, á los residentes en Ultramar. No incurrirán en las penas de la morosidad, aunque se presenten despues de celebrada la junta de graduacion, y se hará en tal caso, respecto de aquellos lo que para estos dispone el art. 582.

En virtud tambien de dicha disposicion, en la convocacion de juntas de acreedores, cuando la ley de Enjuiciamiento civil ordena, como en el art. 507, que el juez señalará término bastante, para que puedan concurrir todos los acreedores, que residan en la Península, deberá entenderse en Cuba y Puerto-Rico, que el término ha de ser bastante para que puedan concurrir los que residan en el territorio de la isla, en que se siga el juicio: y así en los demás casos. Bastan estos ejemplos para que se comprenda el objeto de dicha disposicion, y puedan aplicarse rectamente, en su caso, los de la ley de Enjuiciamiento civil.

Otra modificacion mas importante, aunque del mismo órden, es la que se hace por el artículo 14 de la propia instruccion. «Se entenderá, dice, suprimido el art. 582 de la ley de Enjuiciamiento, y ocupará su lugar el párrafo 2.° del 581.» Esta segunda parte no tiene otro objeto, que llenar el vacío que dejaba el artículo suprimido, á fin de no alterar la numeracion en la nueva edicion de la ley, que se mandó hacer para Ultramar. Lo importante es la primera parte, esto es, la supresion del art. 582. Segun este artículo, «los acreedores, que residan en las islas Canarias, cualquiera que sea la forma en que hayan sido convocados, no incurrirán en morosidad, hasta despues de celebrada la junta de graduacion.» Si esto es justo respecto de la Península, podia no serlo cuando el juicio se siga en Ultramar, atendidas la grande distancia y la dificultad de las comunicaciones por mar. Por esto es justa esa modificacion, y los residentes en Canarias, quedan en la misma condicion que los que residen en la Península y en el estranjero, y no incurren por tanto, en pena alguna por su morosidad, aunque comparezcan despues de la junta de graduacion, en los concursos que se sigan en Cuba ó en Puerto-Rico.

Estas son las únicas modificaciones que deben tenerse presentes en Ultramar, para aplicar en dichas islas las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, relativas á los concursos de acreedores. Tambien se tendrá presente, para la asignacion de dietas al depositario y demás casos análogos, que, segun el art. 1.° de la citada instruccion de 1865, las cantidades designadas en la ley para la Península, reducidas á escudos, se han de computar en las islas de Cuba y Puerto-Rico al respecto de 2,50 escudos por uno. En todo lo demás, ó sea con dichas modificaciones, el procedimiento que hoy ha de seguirse en aquellas provincias, es enteramente igual al que hemos espuesto en el presente artículo, teniendo en cuenta todavia la disposicion conocida de que en defecto de leyes especiales de Indias, rigen en aquellos dominios, y por tanto en Filipinas, las de Castilla.

CONCURSO UNIVERSITARIO. Por los planes y reglamentos académicos vigentes, el concurso es sin debate personal; pero presentando cada uno de los que aspiran á un ascenso de cátedra y categoría, nota justificativa de sus méritos y servicios en la misma, y el tribunal, comparándolos, decide.

CONCUSION. Del verbo latino *concutio* (*concussum*), sacudir con fuerza una cosa con otra. En sentido figurado y con mas ó menos propiedad, se aplicó entre los romanos al choque y situacion moral, violenta de ordinario, entre el sobornante con dádivas, promesas ó precio, y el juez, ó funcionario público sobornado, ó tratado de sobornar. Si este cedia, su abuso llegó á calificarse de *crimen concussionis*, y *crimen repetundarum*: el sobornante, se reputaba cómplice, como en las legislaciones posteriores, falseando así el principio moral filosófico, me-

jor entendido y acertadamente aplicado por nuestro Código penal, *qui est causa causæ, et causa causati*, siendo cierto, que, sin la oferta del sobornante, no hubiera delinquido el sobornado.

En un principio se aplicaba la calificacion entre los romanos, á la violencia causada al que se exigia dinero ú otros intereses, por supuestos mandatos del presidente de la provincia; ó por dejar de acusarle de algun delito, tal vez supuesto. Despues, por la ley Julia *repetundarum*, esto es, *de las cosas entregadas que podian reclamarse*, se estendió al crímen del juez, que dictaba sentencia, absolviendo, ó condenando por precio.

Posteriormente, en el largo período, en que la legislacion penal y la norma judicial en este punto, eran prudenciales, con sus *penas estraordinarias* además, la denominacion se sostuvo entre los autores, aumentándose sucesivamente con otras, que, con mas ó menos precision, comprendian su objeto, como *cohecho, soborno, venalidad, prevaricacion, barateria etc.*; las cuales, en vez de precisar el lenguaje jurídico, lo confundian, haciéndolo depender en gran manera, al acusar y juzgar, del criterio y género de estudios del juzgador y del jurisconsulto. Cuando apareció y se realizó la moderna codificacion en diversos estados, todo cambió: el delito, la penalidad y el procedimiento, se ciñeron á reglas y denominaciones fijas, y á ellas, sin dejar de dar á conocer históricamente las denominaciones anteriores, no aceptadas, hay que atenerse.

En este sentido, la concusion, no es con esa denominacion un delito, en nuestro Código penal. Segun este, el que practica un hecho, sin el cual no tendria lugar el delito, no es ya reputado cómplice; sino autor como el perpetrante; y además, aunque el objeto de la concusion viene castigado, como no podia menos, lo es bajo otras denominaciones, como la de *prevaricacion* (cap. 1.°, tít. 18, libro 2.°); *cohecho* (cap. 13, id.): y *exacciones ilegales* (cap. 15, id.). Y como, segun el mismo Código, «no serán castigados otros actos ú omisiones, que los que la ley, con anterioridad, haya calificado de delitos ó faltas (art. 2.°),» y como por él «quedan derogadas todas las leyes penales generales, anteriores á la promulgacion del mismo, salvo las relativas á los delitos no sujetos á sus disposiciones, con arreglo á lo prescrito en su art. 7.°» (art. 506), no hay sino atenerse el juzgador, el ministerio fiscal y la defensa, á la tecnología del propio Código: y véanse tales artículos, como en el Código penal de 1870, los correspondientes y títulos mencionados.

CONDE. De la palabra latina *comes*, el compañero. Conde, dice la ley de Partida, tanto quiere decir, como *compañero* «que acompaña cotidianamente al emperador ó al rey, faciéndole servicio señalado: é algunos condes habia, á que llamaban *palatinos*, que muestra tanto, como *condes de palacio*, porque en aquel logar les acompañaban, é les facian servicios continuamente; é los heredamientos que fueron dados á estos oficiales, son llamados *condados*.» (Ley 11, tít. 1.°, partida 2.°) La ley reseña, aunque lacónicamente, lo que fueron los condes hasta su tiempo, y aun posteriormente, pues habla ya de los *heredamientos*, y solo hay que indicar el último estado de estos títulos.

En tiempo de los emperadores romanos se llamaban condes, en efecto, los que en palacio les acompañaban y servian, sin espresar entonces mas que este honroso servicio, puramente personal, no hereditario, como despues los llamados, ya há mucho tiempo, mayordomo mayor, intendente de palacio, etc.

Constantino les encomendó ya destinos ó servicios públicos, fuera de palacio, en los cargos principales de la administracion del Estado: cuya práctica siguió, y aun se aumentó, durante la dinastía goda. Entonces la denominacion de *condes palatinos*, indicaba la diferencia de los que practicaban su servicio dentro de palacio y fuera de él; pero aumentadas las atribuciones en este caso para los condes no palatinos, eran autoridades superiores de provincia, con las funciones indispensables de tales.

El conde *palatino*, llamado así por antonomasia, era sin duda el que tenia el gobierno de palacio, con otros condes á sus órdenes, y hay motivos para creer que estos eran

Lorenzo Arrazola

los que, con la denominacion de *missi dominici*, ó enviados domésticos de la casa del Rey, eran mandados en comision á las provincias con encargo temporal y especial, como inspeccionar, corregir abusos, etc.

Pero el cargo de conde dejó de ser dignidad y oficio personal, y se trasformó en dignidad hereditaria, con señorío territorial, como lo hemos conocido, para lo cual los Reyes, en premio y recuerdo de servicios propios ó de sus ascendientes, les concedian tierras, ó los *heredaban*, cuyos heredamientos «que fueron dados, como dice la ley, *á estos oficiales, son llamados condados*;» habiendo sido el primero que constituyó estos, segun la historia, el mismo autor de las Partidas, otorgando en esa forma á sus primos D. Luis y D. Juan, el condado de Belmonte. Sabido es, y lo reseñamos en su artículo, hasta qué punto, y aun hasta qué escándalo, se aumentaron esos heredamientos y régias donaciones y *mercedes*. Los condes, como los demás títulos de Castilla, fueron así dignidades nobiliarias y señores de vasallos, todos trasmisibles de padres á hijos.

Sabido es que los *heredamientos* y mercedes llevaban en sí la obligacion de servir al Monarca, en tiempo de guerra, con cierto número de *lanzas* y *peones*. Habiendo dejado de ser necesario, y ni aun conveniente, este servicio, por la sucesiva organizacion militar y novedades introducidas en el arte de la guerra, en decreto de 28 de Diciembre de 1846 se hizo redimible, como en los demás títulos de Castilla, *ahora del Reino*, mediante una cantidad, que debe hacerse efectiva en cada sucesion, al sacar la cédula, pues sin ella, no pueden usarse los títulos nobiliarios, á punto de constituir delito la contravencion.

Con el tiempo, el título de conde ha llegado á espedirse como mera distincion social, ora personal, ora hereditaria, pero nominal, sin señorío, ni territorio, aun como mera *gracia al sacar*, mediante un *servicio* pecuniario; en atencion á lo que, no en su origen; pero sí en sus vicisitudes y estado actual, tiene esa circunstancia comun el título de conde y los demás títulos nobiliarios. Véase **TÍTULOS DE CASTILLA**.

Cuando el título de conde dejó de espresar un oficio, y sí una dignidad, pudo recaer en hembra, y hubo condesas por sucesion hereditaria, por concesion personal del Monarca, en calidad de mujer del conde, como en la práctica se dice conde el casado con condesa, que lo es por derecho propio.

Por antiguas disposiciones no podia concederse el título de conde, como dignidad, sin que precediese el de vizconde, que, una vez cubierta la formalidad, quedaba caducado al estender la cédula. Despues se ha introducido que pueda retenerse por real gracia, como el de conde, ú otro título á que preceda; y tambien ser concedido aislada y directamente, sobre todo desde el citado Real decreto de 1846.

El título de conde tiene por distintivo corona, guarnecida con perlas, sobrepuestas, al aire, en la parte superior del cerco que la forma.

CONDECORACION. Version de *condecoratio*, con la misma significacion, y originariamente, como el verbo simple *decorare*, del sustantivo *decus*, ó su ablativo *decore*, decencia personal, honra, honor. La voz condecoracion tiene dos acepciones: el acto oficial ó autoritativo de conceder á una persona el uso de distintivos, que honran; y los mismos distintivos, y es la acepcion mas usada. Como es sabido, los distintivos son bandas, cruces, placas, medallas, cintas, collares, que en la apreciacion pública distinguen y honran al que los lleva; tanto mas, cuanto mas merecidos sean.

Hay tambien condecoraciones no oficiales, como las adoptadas y otorgadas por empresas ó asociaciones humanitarias, de navegacion, científicas, etc., para estimular, y para hacer público el mérito señalado de los que se han distinguido, con bien de la sociedad, de la humanidad, de la ciencia, de la industria, etc. Pero condecoraciones, por antonomasia, son, las oficiales.

Sobre todas tiene intervencion la autoridad administrativa: respecto de las oficiales, para que se cumplan las leyes, órdenes y decretos de su institucion, y que determinan su forma y su uso; en cuanto á las no

oficiales, bajo el punto de vista del órden moral y social.

Tambien respecto de las primeras, si, estando gravada su obtencion en favor del tesoro público, ha sido este defraudado.

Las condecoraciones estranjeras, sobre todo las de clase superior, no pueden usarse en el Reino, sin real autorizacion, y solventando la retribucion, que haya impuesta en favor del tesoro; y es indudable la intervencion y competencia de la autoridad administrativa sobre uno y otro estremo.

A veces puede tener tambien intervencion y competencia la autoridad judicial, y es en caso de abuso, cuando la condecoracion tiene tambien el carácter de *distintivo* de autoridad, como la medalla judicial, la cinta y medalla de un individuo ú oficial municipal; cuando resulte, en fin, perjuicio de tercero; en cuyos casos podrian tener aplicacion los artículos 251, 252 y 253 del Código penal, y otros, como los relativos á estafa.

Está mandado, en fin, que las condecoraciones se usen como está ordenado, y sin que se pueda alterar la forma, calidad y dimensiones de ellas.

Son infinitas en número, y seria interminable el descender á tratar de cada una. Cuando ocurra un caso de abuso y responsabilidad, se tendrá á la vista la ley de su creacion y uso, y además dedicamos artículo especial á las principales. Véase **DISTINTIVO**.

CONDENAR. Del verbo latino *condemno, condenare*, con la misma significacion. En lo jurídico es imponer por sentencia al acusado ó demandado, y en sus casos á cualquiera de las personas implicadas en el juicio, ó que son parte en él, la pena, corporal ó pecuniaria, restitucion, pago, indemnizacion, demostracion, costas, gastos del juicio, y cualesquier otros gravámenes, que procedan, segun la ley y la naturaleza del proceso.

Condenar y absolver son los fines cardinales del juicio. «Los sábios dijeron, expresa la ley de Partida, que aquel puede condenar á otro, que ha poder de lo quitar.» (Regla 14, tít. 34, Partida 7.ª) Ciertamente: como puede absolver el juzgador, puede condenar; pero no porque una de estas atribuciones se derive de la otra, como de su causa; sino que ambas son necesariamente conexas, igualmente derivadas de un mismo principio, causa comun y radical de ambas: de la facultad de juzgar, ejerciendo en el caso jurisdicion competente.

Dícese *condenado* aquel, á quien se impone la pena. Dícese tambien en tales casos *condena, condenacion* y *condenatorio*. La primera de estas voces, espresa de ordinario, la pena impuesta; la segunda la declaracion imponiéndola. Así condenacion en costas, por ejemplo, no son las costas mismas, sino la imposicion de ellas. La tercera significa la sentencia ó providencia que condena.

En todos tiempos, y donde quiera que son acatadas la razon y la justicia, ha prevalecido, como principio, *que ninguno debe ser condenado, sin ser oido*: principio venerando, no pocas veces quebrantado por la índole de las civilizaciones y formas de gobierno, ó la rudeza de los tiempos. Pero el hecho no puede decidir del derecho, y menos tratándose de una de las primeras garantías personales, en que, si la personalidad humana es algo, siempre deben pensar sériamente la sociedad, el legislador y los gobiernos; subiendo de todo punto su importancia, si se trata de la vida del hombre. En este punto, hasta nos parece débil, inadecuada por poco enérgica, la fórmula con que, en doctrina, viene consignada esta prominente garantía, y alto deber social: *Neque enim inaudita causa, quemquam damnari equitatis ratio patitur*. El desenvolvimiento de este principio, que por su radical trascendencia, es en la materia como derecho universal constituyente; el determinar la forma y los límites de la defensa, el fijar el criterio legal, corresponde á las leyes del enjuiciamento. Véanse los multiplicados artículos á él referentes, como **ABSOLUCION**, **DEFENSA**, **CRITERIO**, **ENJUICIAMIENTO**, **JUICIO**, **SENTENCIA**, etc., sin perjuicio de lo que conduce consignar aquí algunas consideraciones.

De la necesidad, del derecho absoluto á su defensa por parte del reo, para poder ser con-

denado, se deduce que los motivos de cargo le han de ser conocidos, con lo que se resuelve la cuestion, algunas veces propuesta, de si el juez podrá condenar por su *ciencia privada* sobre el hecho justiciable. La ciencia privada del juez, no es un hecho externo, de que pueda defenderse el reo; no puede ser tomada en cuenta por el tribunal superior, en su caso; no puede ser fundamento de motivacion, hoy que es de necesidad legal motivar las sentencias. La ciencia privada servirá al juez para ordenar con mayor acierto, y mayor seguridad de éxito legal, los procedimientos. No hay que decir que la precedente teoría, falta en el *jurado*.

Con esta cuestion se enlaza la del criterio legal. Habiendo el hombre de ser juzgado por el hombre, es decir, que siempre, con absoluta evidencia, con incontrastable fatalidad, el hombre es juzgado por un juez falible. De aquí los esfuerzos del legislador para asegurar en lo jurídico, no la verdad absoluta, que seria vano empeño; sino la verdad posible, prescribiendo reglas inflexibles, y hasta materializando el criterio judicial, medio incostrastable de su demostracion; haciéndola triunfar á un tiempo, si ser pudiera, de la falibilidad del juzgador y de su arbitrio. Y será una sola sentencia, ó serán tres la que produzcan *setencia firme*: será, sino, un número indefinido de ellas, hasta que resulten tres sentencias conformes, como alguna vez en lo canónico. Materializando el criterio jurídico, dos testigos contestes, mayores de toda escepcion, harán plena prueba, constituirán evidencia legal. Si son muchos los testigos, en uno y otro sentido, lo constituirá la razon del juez, inclinándose, no precisamente al mayor número; sino al número de los que crea ofrecer mayores garantías de verdad: hará evidencia asimismo el juramento *decisorio*; y entre otros infinitos medios, la constituyeron á su vez, la confesion arrancada en el *tormento*; y hasta el éxito fortuito del llamado *juicio de Dios*.

Tratándose de la vida del hombre, el legislador, consignando, como un último esfuerzo de cautela y ardiente deseo de justicia, quiere que las pruebas sobre el hecho justiciable, sean para condenar, «*claras como la luz*, de manera *que non pueda sobre ellas venir dubda ninguna.*» (Ley 26, tít. 1.°, Partida 7.ª; y 12, tít. 14, Part. 3.ª) Y aun añade el legislador que, si las pruebas no fuesen tales «é el acusado fuese ome de buena fama, *débelo el juzgador quitar por sentencia.*» «Si el reo era *mal enfamado*... é por las pruebas fallare *algunas presunciones* contra él» debia el juez someterle á *tormento*, y si, ni por su confesion, ni por las pruebas, lo hallare culpable del hecho, debia *darle por quito*. ¿Quito de la pena absoluta, señalada al hecho por la ley, ó de toda pena? Sin duda el legislador quiso solo lo primero, aunque parece decir lo segundo. Con prudencia habia dicho el mismo en otra parte, que alguna vez se puede condenar *por sospechas*; esto es, por *indicios y conjeturas*. Otras veces, en fin, para todos los casos, y aun para la pena de muerte, el criterio legal era *taxativo*, inflesible, como en la prueba plena por dos testigos contestes, mayores de toda escepcion.

Pero el criterio legal no era siempre absoluto. Nada mas perjudicial por otra parte, que el haber de relevar de toda pena al encausado, cuando no se daba plena prueba, aunque resultase prueba relativa de testigos, indicios acaso necesarios, *presunciones*, etc. La ley habia dicho, repetimos, que se podia fallar por indicios, lo cual, aun sin consignarlo la ley, dá lugar al *criterio racional*, á la apreciacion de prudencia jurídica, que requeria para el debido acierto, *gradacion precisa* en las penas. Las antiguas leyes omitieron este importante requisito y garantía de justicia y de equidad; y sucedió lo que no podia menos de suceder, y por cierto para bien de la justicia: los sobreseimientos, sin perjuicio, la absolucion de la instancia; y aunque fatalmente, tambien, haciéndolas necesarias el estado de la legislacion, las *penas estraordinarias*.

Pero publicóse el Código penal de 1848, con precisa y oportuna gradacion de penas: para prevenir la impunidad en todo caso, y que la delincuencia sea siempre castigada en la proporcion, en que se pruebe, se asoció al *criterio legal* y absoluto, el *criterio racional*;

y en razon de ello se establece en la regla 45 de la Ley provisional para la aplicacion del mismo: «En el caso de que, examinadas las pruebas y graduando su valor, adquieran los tribunales el convencimiento de la criminalidad del acusado, segun las reglas ordinarias de la *crítica racional*; pero no encontraren la evidencia moral, que requiere la ley 12, título 14, Part. 3.ª, impondrán en su grado mínimo la pena señalada por el Código.»

De este modo no se dará *por quito*, á quien, si no condena el *criterio legal* absoluto, le condene, sin embargo, el *criterio racional*. Por este medio han acabado tambien las *penas estraordinarias*. Segun el Código no se impondrán otras penas que las establecidas préviamente por la ley (arts. 1.° y 9). Esto en cuanto al fuero comun: en los fueros especiales va ganando terreno la teoría, que al fin prevalecerá, como debe, en todos los órdenes.

Despues de la codificacion general, en fin, y no ya segun la ciencia jurídica; sino tambien en virtud de nuestra actual legislacion, si bien para lo penal, aun se esperan el definitivo arreglo judicial y la adecuada ley de enjuiciamiento, han perdido su eficacia y dejan de tener aplicacion, como teorías jurídicas, ciertas máximas, plausibles en su fondo, y en su fin, y que en antíguos tiempos, por la confusion é incoherencia de las legislaciones, gozaron de aquel concepto. Así, cuando estaban en práctica las *penas estraordinarias*, cuando no eran precisas y terminantes las reglas de enjuiciamiento, cuando el sistema penal era, digámoslo así, prudencial, pendiendo tanto del arbitrio del juzgador, era una máxima benéfica y saludable la de que, *el juez debe estar mas dispuesto á absolver, que á condenar*. Pero en una legislacion bien entendida, el juez no debe estar dispuesto ni predispuesto mas que á hacer justicia, que así puede consistir en absolver como en condenar. Si el juez debe ser impasible, como la ley, no debe estar predispuesto mas que para hacer justicia inflexible, y esa, no por predisposicion y sentimiento puramente personal, lo cual es ya un principio, por lo menos, de juzgar con pasion; sino por conviccion jurídica.

Análoga era tambien la máxima, y aun encargo legal, *de absolver antes al culpado que castigar al inocente. Satius est facinus nocentis remanere impunitum, quam inocentem damnare*. Los sábios antiguos dijeron, espresa la ley de Partida, que «mas santa cosa era de quitar al ome culpado, contra quien non se puede fallar prueba cierta é manifiesta, que dar juicio contra el que es sin culpa, magüer fallase por señales algunas sospechas contra él» (ley 12 citada, Partida 3.ª). En este caso, como en todos, lo santo y lo justo es proceder con sujecion al rigor estricto de las pruebas; si son plenas, como plenas; si son indicios y conjeturas, como tales, ayudándose en su caso, del *criterio racional*, segun hoy es ley del Reino. Lo que es santo siempre es no condenar sin prueba; y condenar siempre con ella.

CONDESAR, CONDESIJO. Lo mismo que *depositar, depósito*. «*Depositum*, en latin, tanto quiere decir en romance, dice la ley de Partida, como *condesijo*.» Y en efecto, bajo esa doble enunciacion tratan dichas leyes del depósito, en todas sus especies (tít. 5.°, Part. 5.ª).

CONDESTABLE. Alta dignidad, la primera despues del Rey en Castilla, Aragon, Francia y otros pueblos de raza latina, lo que revela su orígen, igual al de *conde*.

No puede dudarse, en cuanto á la primera parte de la voz. La segunda, segun unos, seria la de *stabilis*, respondiendo perfectamente la traduccion *condestable*; y en palacio, como fuera, espresa un cargo vitalicio, *perpétuo*: y es cierto que el condestable era inamovible.

Segun otros, la segunda voz era *stabuli*, establo, caballeriza: en cuyo caso podria espresar que esa preeminente dignidad tenia á su cargo, en un principio, las reales caballerizas, equivaliendo entonces la voz, á *caballerizo mayor*.

En el Concilio 13 de Toledo, entre los condes y dignidades palatinas, que firman, es uno *Gisclamundus, comes stabuli*, que los traductores vierten en condestable; á lo cual no responde el ser de los palatinos el duodécimo de los 26, que suscriben, de donde hay

que inferir, que entonces, el *comes stabuli*, era uno de los cargos de palacio, y no el superior, y menos la alta dignidad, que luego se conoció con esa denominacion.

Alguno de nuestros escritores, presenta el cargo del condestable, como equivalente al de *magister equituum* de los romanos. Pero llegó á ser mucho mas, pues se daba á los príncipes y grandes hombres del país; que, como hemos dicho, el condestable era en el Reino la primera persona despues del Rey. Delante de éste, llevaba pendon, mazas y reyes de armas. Era como el único generalísimo del reino: formaba, ordenaba y mandaba los ejércitos, con suprema autoridad en todos los ramos del servicio, en tiempo de paz y de guerra, en las fortalezas, y en la hueste, con jurisdiccion omnímoda, *mero* y *misto* imperio. Aun hallándose presente el Rey, presidia los duelos.

En Castilla fué instituido el cargo de condestable por el Rey D. Juan I, en 1382, nombrando á D. Alonso de Aragon, marqués de Villena, de sangre real, pues era hijo del infante D. Pedro y nieto de Jáime II de Aragon. En Aragon el primer condestable fué el infante D. Martin, hijo de Pedro IV. En Navarra, iba aneja esta dignidad al condado de Lerin: en Portugal, á la casa de Braganza.

El sesto condestable fué, en Castilla y Leon, D. Pedro Fernandez de Velasco, conde de Haro (en 1473), de cuya casa, unida luego con la de Frias, no salió despues. Con el tiempo, quedó el título reducido á una dignidad honorífica de familia, sin mas funciones, que la de ostentar desnudo el estoque real los condes de Haro, en las juras de los reyes.

CONDICCION. Version de *condictio*, con la propia significacion; aunque ménos usada entre nosotros, que entre los romanos: reclamacion ó repeticion de lo pagado por error, sin ser debido, ó pagado por mal motivo. Los romanos tenian las acciones *condictio indebiti, condictio ob turpem causam.* Entre nosotros tienen lugar las mismas reclamaciones; salvo el caso de connivencia ó de culpa ó malicia de ambas partes, del que ha recibido y del que ha dado, como en el *cohecho*, en cuyo caso, segun el Código penal, las dádivas caen en comiso (art. 317).

CONDICION. Del latin *conditio*, y esta voz del verbo *condere*, construir, constituir; dejándose bien entender por ello, la importancia de la condicion, cuando interviene, sobre todo en los contratos y testamentos. Su frecuencia es igual á su importancia, pues apenas hay contrato ó testamento sin ella. La voz tiene además otras acepciones, no de tan rigoroso derecho, pero importantes: todo lo cual requiere que en todas sus especies sea tratada con alguna detencion.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. DE LAS CONDICIONES EN GENERAL.
SEC. II. DIVERSAS ESPECIES DE CONDICIONES.

SECCION I.

DE LAS CONDICIONES EN GENERAL.

«La condicion, dice la ley, aviene sobre tres cosas: en las personas de los omes, en sus bienes, é en las promisiones, que facen unos á otros» (ley 1.ª, tít. 4.º, Part. 4.ª). Como era de suponer, otra ley espresa que tiene lugar tambien en los testamentos (ley 1.ª, tít. 4.º, Part. 6.ª).

Desenvolviendo convenientemente la idea, la condicion, con relacion solo al derecho, tiene distintas acepciones, con significacion mas ó menos diferente. Tiene aplicacion, en efecto: 1.º, con relacion al órden social, á las clases de ciudadanos: 2.º, al hombre en su personalidad aislada, en cuanto á sus cualidades, y á veces aun con opuesto resultado, como veremos: 3.º, á las cosas de los hombres que están en el comercio humano ó se ligan á él: 4.º, en las convenciones; y 5.º, en las últimas voluntades.

En el primer caso la condicion esplica el estado ó clase social del hombre, y en ese sentido se dice que es noble, plebeyo, libre, siervo, natural, estranjero, padre, hijo de

familias, *sui juris*, *alieni juris*, amo, criado, eclesiástico, lego, señor, vasallo ó súbdito, etc., etc.; siendo la enumeracion estensiva á todos los estados y clases, que en cada sociedad tengan autorizados en este sentido la ley y las costumbres. Naciendo de la condicion, aun en la acepcion presente, obligaciones y derechos; capacidad ó incapacidad, en el órden político, administrativo y judicial, no hay que encarecer la necesidad de conocer las respectivas condiciones; y de aquí el axioma, *de que cada uno debe conocer la condicion de la persona con quien contrae*: *Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus* (ley 19 Digesto, *De regulis juris*). Es decir, que no puede alegarse, como escusa y defensa, la ignorancia; siendo tambien un axioma en derecho, que, *Scire, et debere scire, idem sunt in jure*. Así, por ejemplo, no aprovecha al mayor de edad, que se ha perjudicado tratando con un menor, el decir que no sabia lo fuese, porque debia saberlo, lo cual es lo mismo. En el propio concepto, dícese de las personas que son de alta, baja ó humilde condicion.

Sabido es que en lo canónico, la condicion de esclavitud, es uno de los obstáculos dirimentes del matrimonio católico.

En la segunda acepcion, la condicion espresa cualidades morales de la persona, y así decimos de ella en sus casos, que es de nobles ó de ruines condiciones; que se halla en buenas ó malas condiciones para una empresa ó trabajo, etc.

En el tercer concepto, aplicada la voz á las cosas que están en el comercio humano, ó se ligan á él, espresa cualidades y circunstancias, que aumentan ó disminuyen en valor y estimacion, influyendo por tanto en la convencion. Así decimos de un animal, que se compra, se vende ó se alquila, que es de buena, de noble, ó de ruines condiciones; y decimos condiciones del suelo, condiciones del clima, etc. Por ello, si se adquiere ó enajena bajo la circunstancia precisa de buenas condiciones, por lo dicho de que, en el concepto de que vamos hablando, condicion espresa cualidades, la falta de ellas viciará el contrato.

Como hemos visto, en la primera y segunda acepcion de condicion no entra para nada el pacto; en la tercera algun tanto; por la inversa en la cuarta, ó sea en los contratos, la condicion es un pacto, y es formulada ó supuesta de necesidad: ó lo que es lo mismo, *espresa* ó *tácita*. De la primera dice la ley: «Condicion, tanto quiere decir, como *pleito* ó *postura*, que es fecha *sobre otro pleito, con esta palabra, si*, como... prometo de tedar tantos maravedís, *si* fueses á tal lugar por mí. E es de tal manera esta condicion, que si se cumple, confirma el pleito sobre que es puesta; é si por ventura desfallece, non vale la postura principal. E por ende *fasta que sepan en cierto* si la condicion se cumple, ó non, está el pleito principal, sobre que fué puesta, en *pendencia*.» (Ley 1.ª tít. 4.º, Part. 4.ª) Es aplicar de lleno el principio de que *los pactos dan* ley *á los contratos*.

No obstante el tenor de la ley, la condicional, *si*, no ha de mirarse como una forma necesaria; sino como ejemplo de lo que ordinariamente se practica. Así hay que deducirlo del tenor de otras leyes como veremos: á lo que se llega que las fórmulas verbales necesarias se hallan abolidas. Por ello se vé que en la tecnología del foro, hay condiciones *ciertas* y *dudosas*; y lo que es mas, *espresas* y tácitas; y hasta el dia incierto se tiene por condicion. *Dies incertus pro conditione habetur* (ley 15, Digesto, *De condit*; leg. 31, tít. 9, Part. 6.ª). En conclusion, cualesquiera que sean los términos con que se formule la condicion, se tendrá por legalmente tal, si así se evidencia por la práctica del foro y leyes del lenguaje; ó en otra forma, de cualquier modo que se pruebe legalmente que el hombre quiso obligarse con condicion, se entenderá así obligado.

En cuanto al tenor absoluto de la ley, de que, si se cumple la condicion, *confirma el pleito sobre que es puesta*; y si *desfallece, no vale la postura principal*, debe tenerse presente, que hay condiciones que, segun veremos, con solo ser impuestas, anulan el contrato; al paso que en las últimas voluntades, se tienen por no puestas, y vale la disposicion del testador, como si no las hubiere impuesto.

En conformidad á todo lo dicho, por el Tribunal Supremo de Justicia se ha declarado que se contiene condicion en todo aquello, que por mútuo acuerdo de las partes, modifique, restrinja ó estienda los efectos del contrato principal (sent. de 24 de Diciembre de 1866).

El mismo Tribunal Supremo ha declarado, que la cláusula, que á veces se pone en los contratos, de *sin perjuicio de tercero*, no contiene condicion (sent. de 19 de Enero de 1845). Y es que lo contrario es un supuesto de justicia y de necesaria legalidad, que siempre se entiende, aunque no se esprese y sin que penda de la voluntad de los contrayentes, pues estos pueden obligarse entre sí, y á los suyos; pero no á un tercero, que no trata con ellos, y menos en su perjuicio. Es decir, por tanto, que esa cláusula espresa lo mismo consignada que omitida. Prácticamente la declaracion del Tribunal tiene importancia, pues no reputándose condicion dicha cláusula, como se pretendia en caso contrario, el contrato no penderá de la circunstancia negativa de que no se irrogue perjuicio á tercero; sino que valdrá desde luego por esa parte: ni penderá de que se siga perjuicio, pues no reputándose condicion, no tiene en *pendencia* el contrato; y el hecho dará solo lugar, en su caso, á la accion de dolo, daños y perjuicios, etc.

Cuando la condicion es clara y terminante, no puede pretenderse su nulidad por virtud de interpretaciones, mas ó menos fundadas (sent. del Tribunal Supremo de 11 de Abril de 1863). Se trata de la nulidad de una condicion cierta y evidente; pero puede discutirse é interpretarse la certeza de ella; y si así la condicion resulta dudosa, es principio de derecho, que antes la obligacion principal se entiende pura, que condicionada.

A veces se confunde la condicion, con lo que la ley llama *manera* de contratar, y en el lenguage del foro se llama *modo*.

La ley, queriendo establecer la diferencia entre ambas cosas, y enumerando á mayor abundamiento los giros de contratacion, que pueden afectar á un contrato, dice en esta razon: «Prometimientos é donaciones, se facen por alguna de estas guisas; ca, ó se facen por *maneras* ó por *condiciones*, ó por *razon cierta*, ó por *demostramiento*» (ley 8.ª, dicho tít. 4.º, Part. 4.ª).

Se ve, pues, que ni las maneras, ó sea el *modo*, ni la *razon cierta* que dice la misma ley, llamarse *causa*; ni la demostracion, son condiciones, ó bien que obliguen de otro modo que la condicion, lo que no escluye que tengan su valor y significacion legal, como se espresa en sus artículos.

Sabido es, que en la duda, de si una cláusula es condicion ó *modo*; se entiende esto segundo; así como en la duda de si una convencion es pura ó condicionada, se entiende lo primero, segun arriba indicamos, por el principio general de que la ley favorece la libertad (véase á Castillo, lib. 4.º, tít. 55, número 29).

De la condicion tácita, hablamos mas adelante.

La quinta aplicacion de la voz condicion en el derecho, es en las últimas voluntades, y es en el pleno sentido de ella, como en los casos anteriores 3.º y 4.º, habida consideracion, sin embargo, á que no recae sobre convencion principal de dos ó más. El testador es solo, y obra como legislador, que al propio tiempo manda ó estatuye y condiciona, salvo el caso misto de mútua testamentifaccion é institucion de heredero, bajo un contesto entre dos ó mas testadores, en cuyo caso, sin dejar de obrar cada uno como legislador, estatuye acerca de lo mismo con el otro, y no hay mas que estar al testamento.

Con doctrina mas desembarazada que la citada anteriormente, dice otra ley: «condicion, es una manera de palabra, que suelen los facedores de testamentos poner ó decir en los establecimientos de los herederos, que los aluenga la pró de la herencia, ó de la manda, fasta que aquella condicion sea cumplida. E los facedores de los testamentos, á las vegadas, ponen condiciones paladinas..... é á las vegadas, magüer non las ponen, entiéndense calladamente, bien así como si fuesen y escritas é puestas» (ley 1.ª, título 4.º, Part. 6.ª).

Las condiciones en los testamentos, no son

siempre del mismo efecto que en los contratos, segun veremos en la seccion siguiente.

Como hemos notado ya por algunas sentencias citadas, el Tribunal Supremo de Justicia viene estableciendo ó confirmando jurisprudencia sobre condiciones, que conviene tener presente.

Segun ella, solo es eficaz una convencion condicionada, cuando se llenan las condiciones (sent. de 24 de Diciembre de 1866).

No puede en testamento gravarse con condicion, la legítima de los herederos *suyos* y *necesarios* (ley 7.ª, tít. 4.º; 1.ª, tít. 1.º; y 11, título 4.º, Part. 6.ª); pero puede gravarse el quinto (sent. de 12 de Agosto de 1859).

Las condiciones impuestas en un vínculo ó patronato, no obligan mas que al poseedor; no á los demás llamados, que en su dia puedan suceder (sent. de 10 de Febrero de 1865); si se imponen á los primeros llamados, no ha de entenderse, sin mas espresion, con todos los sucesores (sent. de 28 de Febrero de 1860).

La impuesta á un clérigo de que no puede adquirir vinculacion, se entiende solo para adquirir, no para retener, si se ordenó teniéndola (sent. de 11 de Junio de 1861).

La de que los poseedores hayan de pertenecer á clase, cargo ó dignidad determinada, escluye á los que estén incapacitados para ello (sent. de 22 de Marzo de 1866).

En términos absolutos enunciamos siempre que la eficacia de la convencion, institucion ó manda condicionada, pende en su caso, de la realizacion de la condicion, y teóricamente en rigor de derecho es así; pero debe tenerse presente, que en toda condicion, hay que subentender otra tácita, que se desenvuelve en el terreno práctico, y es la de haber de demostrarse para pedir la consiguiente consumacion del contrato, que el hecho se ha realizado en efecto. Sabido es, que cada uno tiene que probar el hecho que alega y mas si es la razon de pedir. Y todavia dice la ley en esta razon: «E por ende fasta que *sepan en cierto*, si la condicion se cumple ó non, está el pleito principal sobre que es puesta en pendencia» (ley 1.ª, tít. 4.º, Part. 5.ª).

El modo, en fin, diverso, y aun opuesto, y no siempre preciso, de apreciar la naturaleza de las condiciones posibles, requiere que consignemos, en conclusion, algunas consideraciones acerca de ello. Nadie puede poner en duda que la naturaleza fija de las cosas proviene de sus propiedades, ó sea de lo que es esencial en ellas, como asimismo que aquellas son generales y particulares. Pero no todas son lucidas, elásticas, etc., porque estas son propiedades particulares, que constituyen por tanto especies determinadas. Aplicando estas sencillas é incontestables nociones filosóficas á las condiciones posibles, que son de las que debemos tratar, ha de haber una circunstancia esencial, una propiedad general, que siendo comun á todas, constituya el género. Sin ella, no serán condiciones: con ella lo serán, y serán *propiamente* tales, aquellas en que concurra. Esta circunstancia esencial, es el hecho, de cuya realizacion pende siempre la eficacia del convenio principal, ó disposicion testamentaria. Sin que medie ese hecho, no ha querido desprenderse el que contrae, ó el que testa, de lo que promete ó manda. El hecho podrá ser de futuro, de presente ó de pasado; pero siempre la realizacion es de esencia, si ha de ser eficaz la convencion, institucion ó manda.

El tiempo en que se realice, en que se haya realizado, ó haya de realizarse, influirá sin duda en el contrato: hará que este se perfeccione en el acto, ó que quede pendiente; pero esa es una propiedad particular, que constituirá diversas especies de condiciones; mas no destruye el género, la esencia general de todas, segun queda expuesto. La condicion de futuro, de pasado ó de presente son especies particulares de condiciones; pero ninguna puede impedir que lo sean las demas en su género, mientras no destruya la esencia de ella, comun á todas, y que es la realizacion de un hecho, de que pende la eficacia de la convencion ó institucion.

En tal supuesto, la ley con mas ó menos precision, diferencia entre condiciones *propias é impropias*; dado que aquello es propio en un género ó especie, que es conforme á su esencia genérica y específica: pero ¿cómo sostener la jurisprudencia, de que las condiciones

de presente ó de pasado *no son condiciones*, asentando ó invocando alguna vez, como principio de derecho que, *tunc tantum potestantem conditionis obtinet* (la promesa, institucion ó manda), *cum in futurum confertur*? En el mismo supuesto algunos autores de crédito, asientan, que «una condicion que no se refiere sino al tiempo pasado, ó al presente, *no es verdadera condicion.*» Lo que puede sostenerse es que la condicion de futuro, es la mas ámplia, la mas grave, la condicion por antonomasia; pero no que sea única y que no sean condiciones verdaderas las de presente y pasado, si bien de diversa especie ¿En virtud, sino, de qué se pediria en ellas la consumacion del convenio? ¿No será porque se ha realizado el hecho, en virtud del que, y no de otro modo, no nudamente, el promitente ó testador se desprendia de lo prometido, ó dado con tal restriccion? Así resalta la exactitud de la doctrina asentada por el Tribunal Supremo de Justicia, en su citada sentencia de 24 de Diciembre de 1866, esto es, que *toda cláusula, que modifique, amplíe ó restrinja los efectos del contrato, es condicion* (Volveremos aun á hablar de la materia en la seccion siguiente).

SECCION II.

DIVERSAS ESPECIES DE CONDICIONES.

Condicion propia é impropia, ó sean de futuro; y de presente ó pasado. «Aquella es condicion propia, dice la ley, que se face por palabras de tiempo que está por venir, porque es *dubda* de si se cumplirá ó non.» «Tal condicion como esta, que se face por palabras de tiempo pasado ó del presente, non se llama condicion propiamente, porque aquella cosa en que la ponen, non es en *dubda*» (ley 2.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª).

La misma ley habia llamado condiciones á estas últimas: «Entre aquellas condiciones, que ponen los hombres señaladamente en sus testamentos, de ellas, y ha que pertenecen al tiempo pasado é otras al tiempo presente, é otras al tiempo que es porvenir (ley 1.ª, idem idem). Pero no dice en absoluto la ley, que las de pasado y presente no sean condiciones; no dice que no influyan en manera alguna sobre los efectos del contrato, institucion ó manda, como era necesario para que no fuesen condiciones: Sólo, pues, si bien de su especie, y conciliando la ley con la ley misma, ha de entenderse que sus palabras espresan solo, que la condicion mas propia, mas grave, mas cierta y estricta, la condicion por antonomasia es la de futuro, como es la verdad. Véase lo que decimos en el particular al final de la seccion I, y la sentencia allí citada del Tribunal Supremo de Justicia. Y todavía añadirémos esta reflexion: enhorabuena que la condicion de futuro impida hasta su realizacion, la perfeccion del contrato, y no así las de presente y pasado, en las que en el acto se perfecciona, ó queda sin efecto, segun el caso, pero en estas, como en aquellas ¿puede pedirse la consumacion del contrato, ó el cumplimiento de la última voluntad, sino en virtud de que el hecho condicional se ha realizado? Pues he ahí uno de los caractéres esenciales de toda condicion, cuya naturaleza, por tanto, no puede negarse en sus clases respectivas á las de presente y de pasado.

La diferencia ahora entre unas y otras condiciones, es que, en las de futuro, siendo posibles, todo está en suspenso, la perfeccion y consumacion de los contratos, la institucion ó legado en los testamentos, hasta que el hecho se realice: en las de presente ó de pasado, el contrato se perfecciona desde luego, si el hecho se ha realizado en efecto y no hay mas que pasar á la consumacion. La misma doctrina es aplicable en las últimas voluntades.

En estas, además, si la condicion de futuro se hubiere realizado ya, sin saberlo el testador, se tiene desde luego por cumplida. Lo mismo, si lo sabia, no siendo reiterable, segun la naturaleza de las cosas, como casarse con Juana; pero siéndolo, como dar una limosna, ir á Roma, hay que cumplirlo ó esperar su realizacion (Gregorio Lopez, á la ley 2.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª).

Imposible. 1.º La que no puede realizarse segun las leyes del órden físico: si to-

cas al Cielo con la mano, si impides que mañana salga el sol.

2.° Las que no deben autorizarse, segun las leyes civiles, el derecho natural, la moral universal, la religiosa, segun la religion del país, y las buenas costumbres: si niegas el pago á tus acreedores; con tal que hagas á los demás lo que no quieras para tí; si faltas á tu palabra; si blasfemas; si te embriagas con frecuencia; si engañas á tus amigos.

3.° Las perplejas, ó sea aquellas, cuyo sentido no puede determinarse ó precisarse: sea Pedro mi heredero, si lo fuere Juan.

4.° Las que esceden las facultades del hombre: te instituyo heredero, si das á la Iglesia un monte de oro. Ponemos este ejemplo, porque lo pone la ley. Ciertamente no habla de un monte de oro natural, que la naturaleza, como es sabido, no ha producido ni produce; ya que por otra parte hubiera herencia, que ofreciese aliciente para ceder por ella un monte de oro. Esta además seria una condicion de todo punto imposible, ó sea *por natura*, en cuyo caso, segun las leyes, en los contratos los hacen nulos; en las últimas voluntades se tienen por no puestas (ley 3.°, tít. 4.°, Partida 6.°).

Pero la ley 4.° siguiente dice, que la condicion mencionada, vicia la institucion de heredero. Habla, pues, de imposibilidad *de hecho*, de un monte de oro artificial. Muchas generaciones y en muchos siglos podrian formarlo; un hombre solo, nunca. Así lo entienden y así concilian las dos mencionadas leyes los comentadores, principalmente Gregorio Lopez.

A dichas clases de condiciones llaman las leyes *imposibles por natura, por derecho, por dudosas ó perplejas, é imposibles de hecho* respectivamente.

En las llamadas *de derecho* se comprenden todas las especies que arriba mencionamos en la segunda clase. «E generalmente son llamadas imposibles, segun derecho, todas las condiciones, que son contra la honestidad, de aquel á quien son puestas, é contra buenas costumbres, ó contra obras de piedad, ó contra derecho natural» (ley 3.°, tít. 4.°, Partida 6.°); y no hay que decir que se comprenden en la misma clase las que son contra derecho civil, privado ó público, ó contra derecho de gentes. *Debe creerse*, decian las leyes romanas, *que no podemos hacer aquellas cosas, que ofenden la piedad, la dignidad y rubor propio, y generalmente las contrarias á las buenas costumbres* (ley 15, *De condit.*, Digesto).

Como hemos indicado ya, las cuatro clases de condiciones imposibles hacen nulos los contratos. No hay ninguna ley del Reino que así lo establezca; pero así lo tiene recibido la jurisprudencia, fundada en razon, y en las leyes romanas (Inst., §. 10, *De inut. stipul.*).

Lo contrario sucede en los testamentos, con las de la 1.ª y 2.ª clase, que se tienen por no puestas, y en tal concepto, vale ó se reputa pura la institucion (ley 3.°, tít. 4.°, Partida 6.°).

Las leyes no dan razon de tan radical diferencia. Segun los autores, es, en cuanto á los contratos, que no puede creerse que estipulan sériamente los que así condicionan; sino que ellos mismos, tratando en ridículo una cosa séria, se burlan del contrato; á lo que hay que añadir, que en cuanto á la condicion imposible de derecho, no solo hay falta de seriedad; sino un hecho punible además, que la ley no puede favorecer, como es el estipular contra la misma y contra la moralidad y buenas costumbres, en sus casos.

Pero si es sério el acto de contraer, ¿lo es menos el de testar? ¿Son en sí menos ridículas las condiciones de la 1.ª, 3.ª y 4.ª clase; y menos irritantes las de la 2.ª? Pero en la convencion hay dos que estipulan lo ilegal, inmoral ó disonante; mientras el testador es solo. No hay duda en la institucion ó mandamiento, y en ellas se vé clara la voluntad, que por tanto debe sostenerse; mientras por la séria situacion en que el testador se encuentra, es honroso para el mismo el suponer que en las condiciones dijo lo que no quiso decir. Llégase á esto, que el instituido ó legatario, ni consiente, ni puede ser responsable, como en los contratos cada uno de los contrayentes de consuno, y querer una condicion ilegal, torpe, irritante ó ridícula; y seria muy duro privarle de la herencia ó legado por un hecho, á

que es de todo punto estraño. Es posible que todas estas razones no satisfagan radicalmente, pero quedan en sus casos respectivos, la ley, la jurisprudencia constante, y á eso han de atenerse los tribunales.

Por la inversa, la tercera y cuarta clase de condiciones imposibles ó sea las *perplejas* y las imposibles *de hecho*, hacen nula la institucion ó manda (leyes 4.ª y 5.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª; Digesto, *De condit.*).

La condicion negativa de no hacer una cosa imposible, como no tocar con la mano en el Cielo, no anula los contratos, y mucho ménos los testamentos (ley 17, tít. 11, Partida 5.ª). Véase mas adelante.

Posibles. Las que no se hallan en ninguno de los cuatro casos anteriores, y son las tres especies, que vamos á mencionar.

Potestativa. La que solo pende del arbitrio de la persona, á quien se impone; y por ello, siempre ha de cumplirse: si vas por mí á Madrid (leyes 12, 14 y 17, título 11, Part. 5.ª: 7.ª, tít. 4.º; y 22, tít. 9.º, Partida 6.ª). Salvo si la cosa se hace imposible; como, si debiendo dimitir un esclavo, éste muere ó perece antes de la dimision, sin culpa ni responsabilidad del señor (ley 14, tít. 4.º: y 22, tít. 9.º, Part. 6.ª). La condicion potestativa, puede ser positiva ó negativa.

Casual, eventual. La que puede verificarse ó no, independientemente del arbitrio del interesado. Pende, pues, del órden general de los sucesos; de la ventura: si llega un buque de América. El contrato, ó la última disposicion, están en suspenso, mientras la condicion no se verifica, y como queda dicho en tésis general; y resultan ineficaces, no verificándose, y dada en su caso la evidencia legal de que no se verificará (ley 14, título 11, Part. 5.ª; y 8.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª).

Muerto el interesado, antes que la condicion se verifique, en los contratos, transmite su esperanza y derechos, en su caso, á sus herederos, por la razon legal, de que *el que contrae para sí, contrae para sus herederos.* En las últimas voluntades, nada trasmite, pues él no pactó (leyes 26, tít. 5.º, y 14. tít. 11, Part. 5.ª: 8.ª y 9.ª, tít. 4.º, y 34, tít. 9.º, Part. 6.ª).

Si, pendiente la condicion, todo ha estado en suspenso; realizada, tiene efecto retroactivo, como sino hubiera existido, siendo doctrina legal, que *conditio, semel existens, retrotrahitur ad inititun, unde venit, ita ut actus, cui adjecta fuerat conditio, pure initus censcatur.*

Mista. La que pende á un tiempo del arbitrio propio y del ageno; y tambien del arbitrio y de la casualidad: si llegas con tu nave desde América, si te casas con Juana. En ambas, la institucion ó el contrato, pende del cumplimiento de las mismas (leyes 12 y 14, Part. 5.ª, y 9.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª); salvo en la que pende en parte del arbitrio ageno, como si Juana no quiere casarse y el interesado nada ha omitido por su parte para que se realizara (ley 4.ª, tít. 4.º, y 22, tít. 9.º, Part. 6.ª).

Necesaria. La opuesta á la casual ó eventual; la que estriva en un acontecimiento, que segun las leyes del universo, no puede menos de suceder: si mañana amanece; si mañana se pone el sol. La institucion ó el legado son efectivos, muerto el testador, porque no puede fallar la condicion (ley 8.ª, título 4.º, Part. 6.ª), por lo que por algunos es reputada, como no propia, ó sea impropia. Dícese tambien necesaria la esencial. Véase.

Esencial. La que consiste en alguno de los requisitos, necesarios *pro forma*, en los contratos ó testamentos; como el número de testigos en éstos, el consentimiento libre en aquellos. Esta condicion es ociosa, en cuanto al contrato ó testamento del mismo que la impone, respecto del cual, es siempre condicion tácita: faltando, falta, aun sin ella, la convencion ó última voluntad; verificándose, es ociosa, pues sin ella es eficaz el convenio ó institucion. Respecto del acto de un tercero, te daré ciento si al testamento de Pedro no falta ningun requisito esencial, puede tener efecto y es en su caso condicion casual. Si en actos propios pudiera ser alguna vez, por especiales circunstancias ó combinaciones, cuestion de tribunales, no habria mas que aplicar la doctrina general de condiciones.

Espresa, esplícita, cierta. La que no deja lugar á dudar que se formula, y por tanto, no ya interviniendo la palabra *sí*; sino cualquiera otra fórmula, como, dado que, con tal que, en el supuesto necesario de que, á condicion de que, etc. Véase sobre este punto la seccion I.

Perpleja. Aquella, cuyo sentido no es posible comprender ó fijar. Pertenece así á la cuarta clase de las imposibles.

Tácita. La que no se ha formulado, pero se subentiende, por necesidad natural ó de derecho. Necesidad natural: te lego los frutos de mi heredad; se entiende, si nacen y se dan (ley 20, tít. 11, Part. 5.ª). Por derecho, como cuando hay que aplicar alguno de los principios consagrados por él; como, por ejemplo, *que el que adquiere ó estipula para sí, estipula para los suyos*: que el gravámen impuesto en estamento á un heredero *suyo* ó *necesario*, se entiende siempre sin perjuicio del derecho de *legítima*. Así, dice la ley, cuando un testador que tiene dos hijos legítimos ó naturales, dispone que por muerte del uno herede el otro, no solo se salvaria en su caso el derecho de legítima, como queda dicho; sino que se subentenderia, que si el premoriente de los dos fallecia con hijos, estos serian herederos de su padre, por condicion tácita. Lo contrario será, si los dos instituidos así, fuesen estraños. Si fuesen uno hijo y otro estraño, premuriendo aquel, rige la condicion tácita, y así está justamente recibido por los autores (ley 10, tít. 4.º, Partida 6.ª)

Honesta. La que es conforme á las buenas costumbres.

Deshonesta, torpe. La que es contraria á las buenas costumbres. En tal concepto corresponde á las *imposibles por derecho*. Véase la seccion I, y condicion *desconvenible*.

Convenible. La que es conforme á la naturaleza del acto, no contrariando, antes realizando en caso, y asegurando sus fines. Alguna vez coincide con la condicion honesta.

Desconvenible. La opuesta á la anterior. Como si uno pusiere por condicion para casarse, el poder separarse ambos á voluntad: el ser la union por tiempo limitado. Siendo estas condiciones de las imposibles por derecho, es claro que impedian el matrimonio, como en su caso, esto es, contraviniendo á derecho, los demás contratos. Tratando solo de perjuicios particulares de los contrayentes, seria cuestion de tribunales, y estos decidirian, consultando la naturaleza de los contratos y la de las condiciones. En cuanto á matrimonios, hay alguna singularidad. Sabido es, que las condiciones inmorales pertenecen á la clase de las imposibles, ó sea imposibles de derecho. Y ahora bien: hemos dicho que la condicion *desconvenible* anula el pacto de matrimonio: sabido es, y dejamos dicho, que anulan tambien las últimas voluntades; y sin embargo, en favor, sin duda, del matrimonio, las condiciones torpes ó inmorales, como me casaré contigo, si robas á Pedro, si incendias su heredad, se tienen por no puestas y vale el matrimonio (leyes 5.ª y 6.ª, tít. 4.º, Part. 4.ª).

Positiva. La que consiste en hacer ó en que se realice un hecho posible y honesto: si vas á Roma, si llueve, si eres premiado. Todas las condiciones de este género, han de realizarse, para que tenga efecto la convencion ó última voluntad.

Negativa. La que consiste en no hacer: sino vas á Cádiz, ó en que un acontecimiento posible no se realice; pues si es posible, ya hemos dicho sobre ello: sino te hacen gobernador.

Con frecuencia las condiciones son caso de tribunales, por haber de tomarse en cuenta las multiplicadas circunstancias, que por las leyes del lenguaje y de órden natural y social; por circunstancias tambien personales ó de familia, por las reglas de crítica jurídica y racional, que fijan su significado y naturaleza; pero pocas lo son mas que las negativas, que apenas pueden ser explicadas, sin descender á una interminable casuística.

Cuando son de todo punto indefinidas, y que abarcan toda la vida de la persona, parecen mas bien una negacion de la promesa ó manda, pues no ha de cumplirse la condicion en la vida del sugeto: si nunca vas á Roma. Las leyes romanas, y las nuestras á veces, hallan medio de traerlas á efecto en las

últimas voluntades, dando caucion el favorecido, de que en ningun modo contravendrá á la voluntad del testador, so pena de devolver la cosa y sus frutos, cuya caucion, de su autor, Quinto Mucio, se llamó *muciana* (leyes 7.ª y 8.ª, Digesto *De condit et demonst*: ley 9.ª, tít. 4.º, Partida 6.ª).

«E si esto non quisiere facer, dice la ley de Partida, non debe haber la herencia, en que era establecido.» ¿Y sino es que no quiere, sino que no puede? Probado así, entiende Gregorio Lopez, que se le debe entregar desde luego la herencia, ó manda, bastándole en el peor caso, la *caucion juratoria*.

Dura nos parece la resolucion, no obstante sus formas de equidad. Habrá herencias ó manda de poca entidad; podrán ser *ad causas pias*, el interesado de recomendable conducta; pero tambien la herencia ó manda pueden ser cuantiosas; de depravada conducta el instituido; no necesitado: mientras los parientes, herederos en su caso ab-intestato, de relevantes circunstancias y conducta, perecen en la miseria. ¿Es mas racional suponer, que el testador quiso mas bien este desarreglo, que puede rayar en escándalo, que lo contrario, y todo á causa de la mera caucion jurada? Muy poderosa y atendible seria en tal supuesto la reclamacion de la familia, y apesar de la justa autoridad de Gregorio Lopez, este seria justamente un caso de crítica judicial.

Nuestras leyes, que como las romanas, segun hemos visto, admiten la caucion *muciana* en las últimas voluntades, nada establecen respecto de esta en los contratos; pero los autores la rechazan; y esa es la jurisprudencia (Gomez, Var. 2, cap. 11, núm. 37). Varias son las razones, que se alegan sobre esta diferencia, aunque no todas satisfagan, pues contrarian en cierto modo el precedente legal espresado de admitirse por la ley en las últimas voluntades. Es una de dichas razones, que el testador, pensando ya pasar á otra vida, á la que no han de seguirle sus bienes, se fije menos en ellos, en aquel momento, que en la condicion, en que no se verifique lo que prohibe, de lo cual responde, y cuyo fin asegura la caucion, aunque no es gran cosa lo que asegura la caucion juratoria; y ya hemos visto que á veces, la admiten como suficiente los mismos autores.

Por la inversa, y porque en las convenciones, el que dispone la condicion, se fija solo en los negocios de la vida, suponen que piensa mas, ó por lo menos tanto, en la cosa, como en la condicion, y de ahí, el no admitirse la caucion. Sin el respeto, que nos impone la jurisprudencia general, sostendríamos como regla práctica, y segura, que exagerando cuanto se quisiera las condiciones de la caucion, debiera bastar, cuando ofreciese omnímoda garantía; pero en todo caso, la razon fundamental y la única sólida, que puede alegarse, es que, pudiendo estipular cada uno de los contrayentes lo que mas le conviniese, no lo hizo, y debe imputárselo á sí mismo, lo cual no puede decirse en las últimas voluntades, pues no estuvo allí el instituido ó legatario, para estipular con el testador.

La condicion de no casarse, impuesta á un célibe y con mayor razon á una mujer, se tiene por no puesta, como contraria á las buenas costumbres é intereses de la sociedad (ley 22, tít, citado del Digesto); pero no así, dicen los autores, si se impone á un viudo (Gomez á la ley 4.ª de Toro, núm. 8: Gutierrez: Covarrubias). En este último caso, no es posible hallar sólida la razon, á lo menos en absoluto. Puede tratarse de un viudo, que apenas ha sido casado, y se halla en la flor de la edad, como en otras circunstancias atendibles; y de todos modos, ni nuestras leyes, ni la Iglesia, condenan las segundas nupcias, y al revés.

Fundados en las leyes romanas (63 y 64, dicho tít. del Digesto), sostienen los autores, que es válida la condicion, cuando la prohibicion de casarse no es general, sino limitada. Nosotros no la limitaríamos, sino siendo singular; y aun en ese caso, si no encerraba inmoralidad especial, como sucederia, si los que en supuesto habian de contraer, traian vida escandalosa, que debia cesar; si el varon tenia sérios deberes morales y legales que cumplir con la mujer escluida; si habia prole que reconocer, etc.

Si á un célibe, ó viudo, se impone la condicion absoluta de no casarse, y luego se hace sarcedote, segun el rito católico, no hay duda de que las cosas han recaido en un caso, en que no hubieran podido empezar, y que la condicion ha cesado; la cual, sin embargo, volverá á renacer, si apostáta y se casa por otro rito, en cuyo caso, habrá de restituir lo recibido con sus frutos, como siempre el que falta á la condicion.

A veces, lo que parece condicion absoluta de no casarse, podrá no ser sino *adicion* ó demostracion, como si un padre mejora á una hija, *sino se casa*, y hay razones para creer, que no se propone prohibir el matrimonio; sino ocurrir á su penosa situacion en su estado de huérfana y soltera, equivaliendo á decir: en caso de continuar mi hija soltera y para hacer menos penosa su situacion, la mejoro, etc.

La fuerza mayor, ó causa violenta, que obligase á faltar á la condicion, constituye justamente un caso de tribunales.

Copulativa. La que abraza dos ó mas casos, y todos han de cumplirse: si vas á Roma, á París, y á Lóndres.

Disyuntiva. La que contiene dos ó mas casos, en alternativa ó separables; si vas á París, ó á Lóndres, ó te embarcas. Cumplido cualquiera de los estremos, cesa la condicion.

Resolutoria. La que reserva al que enajena la facultad de rescindir la enajenacion ó convencion, en el caso que se estipule. Tiene lugar principalmente, en la compra-venta, con pacto de *retro*; pero puede estipularse en las demás convenciones. No impide la consumacion del contrato; pero llegado el caso, lo rescinde, volviendo las cosas al principio de que partieron.

En los contratos bilaterales, es siempre inherente, aunque tácita, la condicion resolutoria, si uno de los contrayentes, se niega á cumplir por su parte.

La que ha cumplido, puede pedir entonces ó el cumplimiento, ó la rescision.

Véase lo que sobre acciones resolutorias, dispone la ley Hipotecaria, en sus arts. 16, 36, 37 y 38. Tambien en toda su estension los títulos citados de las Partidas, y el 1.°, lib. 25 del Digesto.

CONDONACION. Perdon, remision de la deuda. Los romanos la decian *aceptilatio*, darse por pagado, dar el crédito por recibido. Entre nosotros, en el concurso de acreedores se llama *quita*. Etimológicamente se vé, que la condonacion es de la naturaleza de la donacion. Por tanto ha de ser omnímodamente gratuita: en otro caso no será condonacion; esto es, extincion gratuita del crédito; sino novacion, otro contrato, ó cuasi contrato, que se esplicará por sus circunstancias.

No hay que decir que para la condonacion, quita, ó remision se necesita la misma aptitud para contraer que en cualquier otro contrato.

La condonacion puede ser espresa, y tambien tácita, dejada entender por hechos que la supongan, lo cual penderá del valor y naturaleza de los mismos, segun las leyes.

CONDUCCION. En su orígen romano espresa, tácita, ó espresamente *locacion*: y *locacion conduccion* es en nuestro lenguaje legal, lo mismo que arrendamiento, segun en su artículo esponemos.

CONDUCTA. De *conducere*, guiar, llevar, conducir. Espresa el modo de conducirse cada uno en el órden moral y político, y por tanto en todas las posiciones de la vida. Equivale á costumbres. En lo político y religioso, en el órden moral y social es de derecho muchas veces el haber de acreditar la respectiva conducta, y en ese sentido es usual la frase de *informacion de vita et moribus*, de buena conducta, ó de vida y costumbres.

Significó asimismo el trasporte de caudales para el Erario, con toda la proteccion y seguridades del poder real; y se llamaban *conducta*, la masa de carros y caballerías con que se hacia el trasporte; y tambien los mismos caudales trasportados.

CONDUCHO. Los víveres ó provisiones, que los pueblos debian facilitar á sus señores, en su tránsito por ellos; pagándolos unas veces; otras como derecho y carga señorial. Lo primero sucedia, cuando los grandes y señores los exigian en pueblos de *realengo, abadengo* ó *vehetría*. Si no se pagaban

de presente, debia dejarse prenda, redimible á los nueve dias. Cuando los víveres se exigian con violencia, el hecho se llamaba *malfetría*.

Los pueblos ó particulares agraviados podian acudir al Rey con su queja. El Rey nombraba *pesquisidores*, que se trasladaban á la localidad, hacian llamada á los querellosos, mandaban la queja y justificaciones al Rey, y éste hacia justicia. Era tambien de ley facilitar *conducho* á los pesquisidores, durante su comision.

Como se vé, el *conducho* se asimilaba en mucho á los víveres y raciones que hoy deben facilitarse á las tropas, ó fuerza pública en su tránsito.

Debian facilitarse tambien al Rey en sus marchas; pero entonces, lo que se decia *conducho*, en cuanto á los grandes y señores, respecto del Rey, se llamaba *yantar*.

Hablan del *conducho*, el tít. 9.°, lib. 1.° del Fuero Viejo de Castilla, y las leyes 30 á la 39, tít. 32 del Ordenamiento de Alcalá: véase el Fuero Viejo de Castilla por Aso y Manuel.

CONDUEÑOS. Dícese tambien *condóminos*, y algunas leyes los llaman *comuneros* (ley 9, tít. 13, lib. 10, Nov. Rec.: ley de Enjuiciamiento civil, art. 674); y son los que poseen en comun y de todo punto *pro indiviso*, bienes ó derechos; y de ahí el que el conjunto de estos y aquellos se llame tambien comunion y comunidad de bienes. Cualquier género de division material, un surco en una heredad labrantía, impide la comunion, como que por tal modo el comunero, que ya apenas puede llamarse así, sabe lo que es suyo y lo que puede ser objeto de su solicitud particular. Puede faltar en tal caso el escriturar la particion y que á cada uno se le provea de título correspondiente de propiedad; pero esta formalidad no impide la real y verdadera division, ni el comunero aguarda á ese trámite para reconocer tópicamente su parte, que ya no ha de variar, no siendo de concierto, lo cual seria ya novacion, por el otorgamiento de escritura; y antes en esta se habrán dado á la parte separada la extension y límites que traian por el surco, hito ó marca divisoria.

Suele suscitarse la cuestion de si tambien los bienes muebles son susceptibles de comunion. Es preciso reconocer que lo es toda clase de bienes y toda clase de derechos, pues á todo se presta la palabra *cosa*, empleada al efecto por las leyes de Partida. Así, todo lo que puede poseerse y disfrutarse, todo lo que en este caso es divisible por cualquiera de los medios, que permite la naturaleza de las cosas y autoriza la ley y la convencion, estando de todo punto *pro-indiviso*, puede ser objeto de la comunion de bienes.

Son diversos, y pueden ser numerosos y con formas mas ó menos precisas, los casos en que se dá esta comunion, que unas veces proviene de la ley, como en la herencia *ab intestato*; otras de voluntad ajena, como en la herencia extestamento, y en el legado de una misma cosa á dos ó mas personas: puede serlo otras de la convencion, ó sea de la voluntad misma de los condueños, lo cual podria constituir sociedad; otras, en fin, independientemente de la voluntad propia y agena, como en un caso de *ocupacion* puramente casual por dos ó mas, de un hallazgo ó casos análogos.

De cualquier modo que la comunion se constituya, de cualquier hecho que resulte, está en el convencimiento de todos que la administracion ha de ser descuidada é ineficaz, y no tal, como la sociedad la requiere y la conveniencia pública lo aconseja, porque falta el poderoso y fecundo estímulo del interés individual, que nunca, en su esfera, puede ser reemplazado por el interés colectivo. Y por esto, y por la oposicion de miras y de caractéres, la esperiencia tiene demostrado que la comunion de bienes es orígen perenne de discordias. A causa de ello, ha prevalecido justamente, como un principio, que la comunion de bienes, cuanto antes pueda ser, sea disuelta, y la ley ordena oportunamente, que cualquiera de los condueños pueda pedir la division cuando quiera y que haya de ser oido, sin que las demás puedan oponerse (leyes 11, tít. 10, Partida 5.ª, y 1.ª y 2.ª, tít. 15, Partida 6.ª). *In communitate vel societate*, dice la ley romana, *nemo compellitur invitus detineri* (ley 5.ª, Código *De communi dividundo*).

Sabido es que para la division en las herencias, las leyes romanas daban la accion *familiæ herciscundæ*; para la de otros casos de indivision, la de *communi dividundo*.

Como siempre debe entenderse la ley en términos hábiles, así es preciso comprender en sus casos el tenor, al parecer absoluto y decisivo, de las antes citadas. Y no solo no es cierto siempre que el comunero pueda de un modo absoluto, y sin que los demás puedan oponerse, pedir la division; sino que cuando la comunion se haya constituido por la ley, por la voluntad agena, ó por la voluntad propia, en los casos que arriba quedan insinuados, las condiciones y restricciones con que lo haya sido, esa es la primera ley del caso. Así, aun cuando la ley, ya establece y ya autoriza la comunidad de bienes entre cónyuges, si un testador instituye á herederos no necesarios, ó lega una misma cosa á dos ó más, prescribiendo que en determinado tiempo no puedan dividirla; si en la comunion convencional se ha estipulado que la comunion haya de durar por mas ó menos tiempo, ó que la division no pueda ser pedida, sino con condiciones y en formas determinadas; y así en los multiplicados casos que son posibles, á eso habrán de atenerse los sócios y los tribunales. Ciertamente que en estos casos será compelido *invitus detineri*, el condueño que quiera lo contrario; pero no lo es *irrationabiliter*, y este es el verdadero criterio judicial del caso.

Aun pudiera darse el de que un condueño, por animosidad, por alucinamiento, por venganza, por cálculo, pidiera la division, con tal inconveniencia, en momentos tan críticos, el de subasta, por ejemplo, en un trastorno público, que fuera inevitable el daño de todos, la ruina ó sacrificio cierto de la cosa comun. El caso es indudablemente de tribunales á reclamacion de los demás, y lo que en formas de derecho estímase la prudencia judicial, eso seria ley para todos: recurso inevitable y frecuentemente aplicado, como vemos que sucede en las divisiones de herencia y division de bienes de la sociedad conyugal.

En el peor caso, los consócios podrian protestar de daños y perjuicios, temerariamente irrogados, y el tribunal podrá estimarlos. Hemos dicho que el caso es de tribunales y estos pesarán las circunstancias y el conflicto de derecho de los consócios.

Algunas veces la comunion es doble, ó viene combinada con otra forma legal y especial de poseer en comun; de donde ha de resultar la necesidad de combinar derechos y atemperar las resoluciones, cual sucede en la division de herencias, en la sociedad conyugal, en la que siempre se dá la comunion de gananciales y puede darse la total de bienes, si lo estipulan los contrayentes; y alguna vez puede resultar en la sociedad como contrato. Véanse los artículos relativos á estos casos.

Puede suceder, que alguna cosa de la comunidad, sea de todo punto indivisible, como un caballo, un oficio enagenado de la Corona; é indivisible sin inutilizarla, como un edificio ó campo por demás pequeños, ó cosas por último, que no se deben, ni partir, ni adjudicar como venenos, libros prohibidos. En tales casos, las leyes han prevenido lo que procede hacer y hasta donde llegan las facultades del juez ó partidor: debe practicarse lo que para casos iguales está dispuesto por las leyes en la division de herencias (leyes 2.ª y 10, título 15, Part. 6.ª, y 6.ª, §. 10, Digesto, *De communi dividundo*).

La administracion, hasta que la division haya de realizarse, será acordada por los sócios: todos tienen el derecho de dar su voto y todos pueden reclamar de perjuicios indebidos.

La reparacion y gravámenes necesarios de los bienes, son á cargo de la comunidad, á prorata de las porciones respectivas. Todos tienen el derecho de reclamar, que estas reparaciones se hagan á tiempo. En caso de resistencia injustificada, cada sócio puede efectuarla de propia cuenta, requiriendo antes á los demás; y puede reclamar despues, el reintegro proporcional. El sócio, que no lo verifique en el término de cuatro meses de la reclamacion, dura es la pena, pero la ley la establece; pierde su participacion en la comunidad, y la adquiere el reclamante.

Fácil es comprender, que el caso anterior

no podria darse, teniendo la comunidad administracion unipersonal, que es lo que á todo trance procede, no solo por conveniencia, que es indudable; sino porque en los casos principales de comunion de bienes, que es como dejamos indicado, en las herencias y concursos, así lo manda la ley. En tal supuesto, es por demás embarazarnos en la implicada casuística, á que descienden los autores, siempre suponiendo la comunidad en administracion colectiva, que es precisamente lo que debe evitarse, por que nunca es mas verdad que entonces, que la comunion de bienes es orígen de discordias.

Si se arrienda ó alquila alguna cosa de la sociedad á un tercero, tiene preferencia cualquier sócio por el tanto. Tiene esta preferencia el que se adelanta á reclamarla, sin que pueda excluirle otro sócio, porque tenga mayor parte en los bienes comunes.

El condueño, puede vender su derecho á un tercero, á no ser que pendiese ya pleito de division; salvo que en este caso, se lo consintieren los demás (ley 55, título 5.°, Partida 5.ª).

Se prohibe el dar á los condueños un sócio estraño, contra su voluntad, iniciada ya la division; pero no el vender á prevencion su derecho, para cuando les sea declarado. En este caso no tienen los consócios derecho al retracto, pues cuando la venta al tercero se consuma, ya no existe la comunion. Si en vez de negar su asentimiento al consócio, se le concediera, se estará á los términos de la concesion; y sino renunció su derecho al retracto, se entiende que lo conserva y que en ese supuesto se hizo la venta.

Si un tercero promueve pleito á la comunidad, pueden los sócios vender sus derechos unos á otros, y todos á uno solo, el cual habrá de responder, como colectivamente, al demandante; en otro caso, habria enajenacion en fraude de acreedores (ley 14, título 7.°, Partida 3.ª).

En la venta á estraños por alguno ó algunos de los sócios, tienen los restantes ó cada uno de estos, el derecho de retraer por el tanto. El que retrae, en este caso, debe comprometerse á no enajenar la finca, ó derecho, retraido, en cuatro años. Sobre este y otros pormenores, véanse los arts. 673 al 690 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No se dá retracto en la venta de un consócio á otro, ni dá preferencia contra un tercero el tener mayor participacion en los bienes comunes; sino que es exclusivo el derecho del que se adelantó.

La ley 53, tít. 5.°, Part. 5.ª establece, que si el Estado es condueño de una cosa con un particular, puede venderla, aun contra la voluntad de éste, salvo el justo reintegro. Los autores atenúan esta fuerte resolucion, que se comprende en el estado de la legislacion y de las costumbres en los diversos tiempos, diciendo que la facultad del Estado, se entenderá solo, cuando en la venta resulte grande utilidad.

La ley 31, título 18, Partida 3.ª, daba facultad al Estado para vender las cosas ajenas, aunque no tuviese parte en ellas. Tenia todo por fundamento cardinal, el *eminente ó supremo dominio del Estado*, que sin embargo, nunca debia aplicarlo, sino por causa de pública utilidad. Del mismo venian á proceder tambien, no ya la *venta forzosa*; sino aun la compra forzosa. Pero los tiempos han corrido, la legislacion y las costumbres se han modificado, han venido quebrantándose, y puede hoy sostenerse, que han desaparecido en el punto en cuestion los derechos del fisco; y hoy es insostenible el tenor de las espresadas leyes; y en ningun caso el Estado, siendo condueño, tiene mas derecho que su condueño; caso que no ha de confundirse, con el de *expropiacion forzosa por causa de pública utilidad*, y que el Estado podrá ejercitar, y la alta administracion, aun siendo condueños y respecto de la cosa comun; pero no será por este concepto; sino por el mencionado de *pública utilidad*. Hay que tener presente además, que en este caso, no hay venta á un particular; sino aplicacion de la cosa á usos públicos. Véase sobre la materia á Gomez, á la citada ley 53, tít. 5.°, Part. 5.ª: á Castillo, libro 3, cap. 6.°

Entre los variados casos de comunidad de bienes, mas ó menos precisa, hay que enumerar el censo, cuando están divididos los

dominios directo y útil, y aun el superficiario: comunion que se rige por reglas especiales y á ellas ha de estarse. Véase **censo** y **retracto**.

CONFARREACION. Así denominaban los romanos á la forma mas solemne y mas antigua para contraer matrimonio. Ya se hizo mencion de ella en el artículo **coemption**, la cual primitivamente era una ceremonia accesoria del matrimonio *per confarreationem*, segun es opinion comunmente recibida entre los que, con mas perseverantes estudios, se han dedicado á investigar las antigüedades del pueblo romano. Dióse á este matrimonio la denominacion de *confarreacion*, de *farrum*, especie de pan ó torta del trigo que nosotros llamamos tambien *farro*, ó *escanda*, amasado con sal y agua, *panis farreus*, *farrum libum*, que era ofrecido con una obeja, como sacrificio á los Dioses, en la celebracion del matrimonio. El orígen de esta solemnidad se pierde en la oscuridad de los tiempos: hay quien la atribuye á Rómulo, aunque segun Plinio, Numa Pompilo fué el primero que introdujo el uso de la escanda en los sacrificios. Pero sea de esto lo que quiera, aparece, como mas probable, que esta ceremonia fuese importacion del pueblo etrusco, uno de los tres que vinieron á constituir la primitiva ciudad de Roma. Completaba el rito de la *confarreacion* el de la *coemption*, y que era una venta civil de la mujer por medio de la *mancipacion*. Véase **coemption**.

La forma de la confarreacion en el matrimonio no era especial á los Pontífices y á los flamines, como algunos han supuesto; sino comun á todas las clases de ciudadanos. Autorizábalo el Pontífice Máximo, ó el *flamin dialis*, esto es, el sacerdote de Júpiter; y se contraia con fórmulas solemnes y en presencia de diez testigos. La mujer, que así contraia matrimonio, salia de la patria potestad, de la familia á que hasta entonces habia pertenecido, y entraba en la de su marido, perdiendo la antigua agnacion, y ganando otra, desde que se celebraba el solemne sacrificio, en que se ofrecia el pan de escanda, segun aparece, entre otros, de un texto, de los fragmentos de Ulpiano (tit. 9, *de his, qui in manu sunt*): *Farreo convenit uxor in manum certis verbis, et testibus decem præsentibus, et solemni sacrificio facto, in quo panis queque farreus adtribitur*. Sabido es que la palabra *manus* significaba, entre los romanos, la autoridad marital. Consecuencia era de este cambio de condicion, que la mujer era hija de familia con relacion á su marido: que participaba de los *penates*, de los *lares* y de los bienes de su marido; *divini et humani juris communicatio*: que se hacia heredera suya, *hæres sua*: que por lo tanto, si el marido moria intestado y sin sucesion, ella le sucedia como hija; y si por el contrario, habia hijos, tenia en la herencia igual participacion que cada uno de estos. El marido, con sus agnados tenia facultad de juzgarla, cuando faltaba á sus deberes; si bien, á veces, era entregada á su antigua familia, para que públicamente la castigase.

La mujer, que contraia esta clase de matrimonio, del mismo modo que el de la *coemption* y del *uso*, únicos medios solemnes de celebrarlo, aunque era en realidad hija de familias, tomaba el nombre de *mater familias*, y unia á su nombre el de su marido. La que no lo contraia por uno de estos ritos; sino en otra forma particular, conservaba sus derechos en la familia de su orígen y se denominaba *matrona*.

Los hijos de los matrimonios *per confarrentionem* se llamaban *patrimos* y *matrimos*. Algunos suponen que solo tenian esta doble denominacion, mientras vivian ambos padres; llamándose solo despues *patrimos*, mientras les vivia el padre, y *matrimos* cuando únicamente les quedaba la madre. El lugar de Festo, de donde lo han deducido, no se presta á esta inteligencia: por el contrario, la opinion mas aceptada y que parece mas segura, es la de que *patrimos* y *matrimos* eran los hijos habidos en matrimonio, celebrado por el rito de la confarreacion: *confarreatis parentibus nati*. Estos hijos tenian algunas prerogativas, en lo que se referia á los ritos sagrados, y algunos sacerdotes, como el de Júpiter, *Flamen Dialis*, y las Vírgenes Vestales, eran elegidos entre ellos.

Debilitados los sentimientos religiosos del pueblo romano, fué lenta y sucesivamente cayendo en desuso el matrimonio *per conferreationem*; contribuyendo á ello muy poderosamente los grandes gastos, que llevaba consigo: el deseo de conservar la antigua familia la patria potestad; y sobre todo, las dificultades que ofrecia para el divorcio, pues que no podia efectuarse, sino por el rito de la *difarreacion* (*diffarreatio*), especie de sacrificio, que solo podia hacerse autorizándolo los Pontífices. La historia refiere, tal vez con exageracion, que á pesar de hallarse permitido el divorcio, desde Rómulo y despues por las Doce Tablas, pasaron 520 años, desde la fundacion de Roma, sin que se presentase un solo caso de divorcio. Añade que el primero que se divorció, Caxvilio Ruge, no lo hizo voluntariamente; sino compelido por los censores, y esto porque su mujer era estéril. ¡Qué diferencia tan grande de este tiempo, al en que Juvenal refiere que una mujer cambió ocho maridos en cinco años, y en que Séneca consideraba, como duracion ordinaria del matrimonio la de los cónsules, cuyo cargo era anual! En medio de tan grande corrupcion de costumbres no es de estrañar que, antes de contraer matrimonio, pensaran algunos el modo de disolverlo con facilidad, y que cayera en desuso la *confarreacion*, por los obstáculos que oponia á la libérrima facultad de divorciarse y de quedar libres del vínculo que iban á contraer. Así, en tiempo de Tiberio, no pudieran encontrarse tres candidatos para ser *flamines*, con la circunstancia de haber sido habidos de padres casados con el rito de la confarreacion (*patricios confarreatibus parentibus genitos*) segun Tácito refiere: de modo que decayendo sucesivamente el matrimonio contraido con la mas solemne de las formas, llegó á completo desuso, quedando solo subsistentes como matrimonios solemnes los denominados *per coemptionem*, y *per usum*.

CONFEDERACION. Lo mismo que *federacion*; version de *fœderatio*, y ambas voces de *fœdus*, pacto, liga, alianza con cierta solemnidad, que segun algunos era la de sacrificarse una víctima, llamando sobre el caso el favor, y de violar el pacto, la ira de los dioses. Desde luego no era el pacto comun entre particulares; sino, como la misma solemnidad indica, entre poderes ó potestades públicas: índole que ha conservado hasta nuestros dias, espresando en el derecho público é internacional, alianza, liga entre provincias, estados, soberanos, beligerantes, ya espresada con las denominaciones que quedan indicadas, ya con las de *federacion*, *confederacion*, como se ve en la confederacion del Rhin, confederacion helvética etc. El pacto federal es la ley especial del caso: en lo que no alcance, y no habiendo exclusion, es lícito recurrir al derecho internacional y de gentes. La solemnidad hoy de la federacion, ó confederacion, es la comun en pactos y alianzas políticas internacionales.

CONFESAR. Del latin *Confiteor*: hacer manifestacion de conceptos ó hechos propios. Esta manifestacion, version de *confesio*, ya espontánea, ya obtenida por diversos medios de apremio legal, y aun arrancada, como en otro tiempo, por el tormento; ora directa, ora indirecta, ó en forma de reconocimiento, tiene en lo civil y canónico diversas é importantes aplicaciones, como vemos á continuacion.

CONFESION CON CARGOS. Se llamaba así, por los que hacia el juez al reo, al terminar el sumario, por el resultado de este, en contradiccion á veces con sus negativas acerca de su culpabilidad. *Se le hace cargo*, se decia en el contesto, de faltar á la verdad en lo que manifiesta, cuando lo contrario consta por declaracion de testigos contestes; cuando lo contrario tiene declarado anteriormente en la indagatoria, etc. Era así la confesion con cargos una lucha entre el reo y el juez, entre los esfuerzos de éste para hallar la verdad y del reo para ocultarla: lucha, en que podia triunfar la superioridad de raciocinio y hasta el esceso de celo del juez; pero tambien, aunque mas difícilmente, la astucia y la negativa sistemática del reo. Cabia ciertamente uso y abuso de parte del juzgador; pero eran separables y podia haberse regularizado el buen uso, como admirablemente lo habia sido por los artículos 8.° y 9.°

del Reglamento provisional. Pero con loable fin, sin duda, se consultó con esceso la libertad del reo, y cuando ya se habia abolido la garantía del juramento (art. 291 de la Constitucion de 1812), se declaró abolida tambien la confesion de cargos (Real decreto de 26 de Mayo de 1854). Dáse como, razon entre otras, al abolir la confesion con cargos, que al mismo fin es suficiente en un proceso la declaracion *indagatoria*. De ninguna manera: esta tiene lugar, cuando aun no está concluido el sumario. Han de evacuarse las citas hechas en ella, siendo pertinentes, y practicarse las diligencias á que den lugar; y pueden darlo á pedir nuevas declaraciones al reo y á los testigos ya examinados, como tambien á examinar otros de nuevo y á practicar tales diligencias, que desmientan y trasformen el resultado anterior del sumario; de todo lo cual debia ser enterado el reo, antes de la confesion con cargos.

Un juez esperimentado y prudente puede todavia subsanar, no el abuso, que nunca sostendriamos; sino el buen uso, á que de suyo se prestaba sin dificultad la confesion con cargos. El juez habia podido siempre, y puede por tanto, recibir al reo cuantas declaraciones estime necesarias en cualquier estado del proceso. El propio Real decreto citado, de 26 de Mayo de 1854, lo establece aun asi; y en eso hemos fundado, al hablar de la confesion judicial en lo criminal, la insinuacion y conveniencia de que el juez acuerde recibir, y reciba declaracion al reo, en el estado en que corresponderia la confesion con cargos, enterándole de cuanto resulte posterior á la indagatoria, todo lo cual podria conducir á confesion, no ya libre, sino espontánea.

En los juicios criminales en materia de Hacienda pública, se habia ya abolido tambien la confesion (Real decreto de 20 de Junio de 1852, art. 70): en lo militar se sostiene todavia; pero téngase en cuenta la unificacion de fueros.

CONFESION DE FE. Al escribirse el presente artículo, la Constitucion política de la Monarquía ha establecido en España la libertad de cultos. Nacerán de ahí necesariamente mayor número de conflictos, no ya en lo dogmático, lo cual no entra en el objeto jurídico de la ENCICLOPEDIA; pero sí en punto á disciplina. Por lo cual creemos de necesidad y conveniencia ampliar el alcance de la obra en artículos como el presente; ya porque la misma se estiende al derecho canónico, ya por el sistema adoptado de instruir á nuestros lectores sobre testos trascendentales notables, como los artículos *orgánicos*, la Constitucion civil del clero, etc.

Confesion de fé, siempre ha podido decirse de la manifestacion ostensible de cada uno de la fé que profesa. En la mística se dice tambien *protestacion*, cuando es acto personal. Despues de la *reforma*, multiplicadas las sectas que de ella brotaron, y divididas en dogma y creencias, para diferenciarse, formuló, adoptó y publicó cada una su símbolo, y es lo que aquí espresa el presente artículo, que abraza, no todas las confesiones y ulteriores variaciones, sino las cardinales, y las mas notables derivaciones.

La primera, y la mas célebre de todas, es llamada confesion de la *Augsburgo*, redactada con la aprobacion de Lutero, por el conocido teólogo de su partido Felipe de Melanchton; y presentada en 1530 al emperador Cárlos V, en la Dieta de Augsburgo. La historia de este notable documento se halla íntimamente enlazada con el orígen y alternativas de la reforma protestante, por lo que, dejando á un lado las causas y sucesos, que la prepararon y siguieron, nos limitaremos á hacer conocer, con sus pormenores, su espíritu, importancia y resultados.

Despues que Fray Martin Lutero, condenadas cuarenta y una proposiciones suyas por el Papa Leon X, fué escomulgado en 1520, por contumaz y rebelde, y en vez de someterse, quemó públicamente en Witemberg la bula de S. S., apelando para un concilio general, toda la Alemania empezó á arder en discordias y divisiones intestinas. Al año siguiente (1521) el Emperador Cárlos V reunió la Dieta en Worms, adonde fué llamado Lutero, y con el competente salvoconducto, se presentó en persona. Interrogado á presencia del Emperador, si eran suyos los escritos pu-

blicados bajo su nombre, y que se le mostraron, así como si consentia en retractarlos. Despues de haberlos examinado, contestó que aquellos libros eran suyos; pero que mientras no se le probase con testos de la Sagrada Escritura que habia incurrido en error, no podia retractarse, porque *la palabra de Dios no era su palabra*.

Amonestado para que se sometiese al juicio de la Dieta, ó de un concilio, repitió con insistencia, que se remitia únicamente á la Sagrada Escritura, porque todo lo demás era falible.

Perdida, pues, toda esperanza de reducirle, se le dejó marchar, y el Emperador promulgó un edicto, espeliendo á Lutero, como hereje, y mandando quemar sus escritos, estableciendo graves penas contra los que lo recibiesen en su casa, y bajo cualquier pretesto lo amparasen, ó defendiesen su causa, de palabra ó por escrito.

Pudo Lutero burlar el edicto, con la proteccion del duque de Sajonia, Federico, que lo tuvo oculto en una de sus fortalezas, bajo el nombre del *caballero Gregorio*. En aquel retiro compuso muchos libros de polémica, para propagar su doctrina, y dió tambien principio á la traduccion de la Biblia. Descubierto, al cabo, su paradero, la actitud de los príncipes del imperio, y el apoyo que varios de ellos prestaron á los sectarios, impidieron que el decreto de Worms se llevase á ejecucion.

Ningun resultado dieron las Dietas, celebradas con este motivo en Nuremberg, en 1523 y 1524; por lo cual, reunida de nuevo en Spira, en 1529, se acordó en ella que los Estados que hubiesen admitido el edicto de Worms, debian seguirle obedeciendo; y que aquellos que no lo hubiesen cumplido, no hiciesen mas innovaciones, permitiendo á los sacerdotes celebrar la misa, y respetando las corporaciones eclesiásticas. Los príncipes luteranos, á saber, el elector de Sajonia, el handgrave de Hesse, el duque de Luneburgo, el Príncipe de Anhalt, el marqués de Brandeburgo, y catorce ciudades imperiales, no quisieron asentir al anterior acuerdo, protestando que era contrario al Evangelio; de lo cual les quedó el nombre de *protestantes*.

En vista de esta *protesta*, el Emperador Cárlos V, resuelto á reducir ó castigar á los innovadores, para conjurar el peligro que amenazaba, pasó en persona á abrir la Dieta de Augsburgo, en 1530, y en ella presentaron los luteranos su *confesion de fé*, redactada por Melanchton y firmada por los príncipes, de que hemos hecho mencion, y los magistrados de Nuremberg y Reutlinga, pretendiendo probar que, no tanto fundaban una nueva iglesia, como la restituian á su primitiva pureza. La confesion, en la cual su autor trató de dulcificar, como es notorio, en todo lo posible las opiniones de Lutero, contenia dos partes: la primera constaba de 21 artículos, que encerraban los puntos del dogma, en que los reformadores estaban mas acordes con la doctrina católica; y la segunda comprendia 7 artículos, contrarios á su creencia y disciplina.

El resúmen de los artículos de la primera parte es el siguiente: 1.°, se reconocen los cuatro primeros Concilios generales, y lo que habian decidido, tocante á la unidad de Dios y al misterio de la Trinidad: 2.°, se admitia el pecado original: 3.°, contenia lo comprendido en el símbolo de los Apóstoles, tocante á la encarnacion, vida, pasion, muerte, resurreccion y ascension de Jesucristo: 4.°, confesaba, contra los pelagianos, que el hombre no puede ser justificado por sus propias fuerzas, si bien se indicaba, que la justificacion se alcanza *por la fé sola*; 5.°, que el Espíritu Santo se comunica á los fieles por los Sacramentos de la ley de gracia; pero diferia de la doctrina católica, sosteniendo que es solo perfecto: 6.°, que la fé debe producir buenas obras, si bien negaba que estas obras sirviesen para la justificacion, pretendiendo que se hacian, *que debian ser hechas* por obedecer á Dios: 7.°, que la Iglesia se componia de solos los escogidos: 8.°, reconocia la eficacia de la palabra de Dios, la de los Sacramentos, aunque los que los administrasen fuesen malos é hipócritas: 9.°, sostenia, contra los anabaptistas la necesidad de bautizar los niños: 10, admitia la presencia real del cuerpo y sangre de Jesucristo en el

Sacramento de la Eucaristía: 11, reconocia la necesidad de la remision para la absolucion de los pecados: 12, condenaba á los anabaptistas, que sostenian la inadmisibilidad de la justicia, así como el error de las novacianos sobre la inutilidad de la penitencia: 13, exigia la fé actual en todos los que reciben algun sacramento, aun en los niños: 14, reclamaba una vocacion legítima para enseñar públicamente en la Iglesia y administrar los Sacramentos: 15, mandaba guardar las fiestas, y observar las divinas ceremonias: 16, declaraba legítimas las ordenanzas civiles, aprobando la institucion de magistrados, *la propiedad de bienes, y el matrimonio*: 17, reconocia la resurreccion de la carne, el juicio universal, la gloria y el infierno, y condenaba los errores de los anabaptistas sobre la duracion temporal de las penas del infierno, y el pretendido reino milenario: 18, que el libre arbitrio no basta para todo lo relativo á nuestra salud espiritual: 19, que, aunque Dios hubiere criado al hombre y le conservase en todos los momentos de su vida, no era, ni podia ser causa de su pecado: 20, que las buenas obras *estaban muy lejos de ser enteramente inútiles*: y el 21, prohibia la *invocacion de los santos*, por creerla derogatoria de la mediacion del Salvador.

La parte segunda comprendia, en 7 artículos, los puntos mas contrarios á la creencia, y disciplina católica. El 1.° ordenaba la comunion, bajo las dos especies, y prohibia la procesion y guarda de la Sagrada Eucaristía. El 2.° condenaba el celibato de los sacerdotes. El 3.° abolia las misas privadas, y queria que el oficio divino se celebrase en lengua vulgar. El 4.° negaba la necesidad de confesar el número de los pecados y sus circunstancias. El 5.° rechazaba la tradicion. El 6.° reprobaba los votos y la vida monástica: y el 7.° limitaba la potestad de la Iglesia á sola la predicacion del Evangelio, y administracion de los Sacramentos.

Despues de varias conferencias, é inútiles tentativas de conciliacion, no pudo resultar conformidad entre los dos partidos, especialmente en los puntos de disciplina, por lo cual los luteranos, que estaban en minoría, abandonaron la Dieta. En su consecuencia, se espidió un decreto prohibiendo la predicacion luterana, como contraria á la Sagrada Escritura, concluyendo por amenazar con todo el rigor de la ley á los que, dentro de un breve plazo, que se señalaba, no renunciasen la herejía. Los príncipes adictos á ella, así como las ciudades, que seguian su bandera, formaron entonces (año de 1531) una liga ofensiva y defensiva contra cualquiera que intentase molestar á alguno de los ligados por motivo de religion: liga llamada de Smalkalda, del nombre de la ciudad, en que se firmó. Logróse por de pronto evitar que estallase la guerra; pero pocos años despues estalló con furor entre las dos partes, viniendo á terminar con la paz religiosa de Augsburgo, llamada así, porque en la Dieta, celebrada en esta ciudad, el año 1555, se concedió á los luteranos libertad de culto, igualdad política con los católicos, y la posesion pacífica de los bienes eclesiásticos, que habian ocupado.

Escluyóse, sin embargo, de ella á los zuinglianos, y calvinistas, por lo cual conviene aquí advertir, que por el mismo tiempo, y aun con anticipacion á Lutero, habia emprendido en Suiza Zuinglio, cura de Zurick, la misma tarea de reformar la Iglesia; pero de un modo mucho mas radical que el primero. Desterró de los templos las imágenes, ornamentos y hasta las cruces: abolió las fiestas, suprimió el episcopado, y dió á la constitucion eclesiástica una forma republicana, estableciendo que la autoridad se funda en la resolucion de los fieles, que esplica su voluntad por medio de representantes.

Zuinglio y Lutero no pudieron entenderse, especialmente en la doctrina sobre el sacramento de la Eucaristía; pues el primero no lo consideraba mas que como un símbolo ó recuerdo; mientras que Lutero confesaba la presencia real de Jesucristo. Así que, cuando en la Dieta de Augsburgo de 1530 presentaron las cuatro ciudades imperiales de Strasburgo, Srindau, Memmingem y Constanza su confesion de fé, conforme á las opiniones de Zuinglio, los luteranos la rechazaron abiertamente, y en vista de tan resuelta oposicion, su autor, Martin Bucero se vió obli-

gado á firmar la confesion de Augsburgo, y mediante cierta concordia, formar parte de la liga de Smelkalda, que á todos interesaba.

Muerto Zuinglio sobre el campo de batalla, empezó á ejercer una influencia decisiva, y casi absoluta en los cantones suizos; Juan Calvino, natural de Noyon en Francia, que huyendo de su pátria, habia encontrado un asilo en la ciudad de Ginebra. Adoptó Calvino la mayor parte de las opiniones de Zuinglio sobre el dogma y la disciplina, y con sus doctrinas se formó en Basilea, en 1536, la *confesion helvética*, que se aumentó y reformó en 1566. Esta confesion fué para la Suiza, Francia, Holanda, y Mediodía de Alemania, lo que la confesion de Augsburgo para el Norte. La antipatía entre los sectarios de estas dos confesiones permaneció muy viva en el imperio, como lo prueba el haber sido escluidos los calvinistas de la paz religiosa de Augsburgo; paz que al fin adquirieron, pasado un siglo.

La confesion de Augsburgo habia producido una decision entre los luteranos, dando el nombre de *láxos* á los confesionistas, y el de *rígidos* á los que profesaban en todo su rigor las doctrinas de Lutero. Su mayor divergencia estribaba en la doctrina sobre la predestinacion, en la que Melanchston, con el partido láxo, sostenia la necesidad del concurso de la voluntad humana, además de la gracia; y la predicacion de la ley antigua, además del Evangelio. Para unir los dos partidos, ideóse una fórmula de concordia, que en 1580 firmaron 96 Estados luteranos, en la cual se reconoce la Santa Escritura, como *la sola norma de fé*, al lado del Evangelio, pero se exije la predicacion de la ley antigua para la enseñanza y disciplina; se admiten artículos indiferentes, se confirma la doctrina del pecado original, así como la universalidad de la gracia; se condena el calvinismo; y se confiesa la presencia real en la Eucaristía.

Esta concordia figura entre los libros canónicos luteranos, al lado de los tres símbolos, á saber: el de los Apóstoles, el niceno, y el de San Atanasio, la confesion de Augsburgo, la apología de los artículos de Smalkalda y los catecismos de Lutero.

Fácilmente se comprende que esta concordia solo sirvió para exacerbar la animosidad entre luteranos y calvinistas, hasta que el miedo del peligro comun los unió, formando una liga protestante, en la cual combatieron durante la guerra de los treinta años. En ella intervinieron, además, la Suecia, la España, y la Francia por último, terminando en 1648 con la *paz de Wessfalia*, en la que se confirmó de nuevo la paz religiosa de Augsburgo, estendiéndose sus efectos á los protestantes de la confesion helvética. En su consecuencia, desde entonces quedó asegurada á las dos confesiones, salvo en España, la libertad de religion y de culto, siendo admitidos sus partidarios en igualdad con los católicos á todos los cargos públicos.

Los sectarios de la confesion helvética se dividieron tambien, como los luteranos, en calvinistas reformados ó *puritanos*, que seguian con todo rigor las doctrinas de Calvino, y *anglo-calvinistas*, que conservaban el uso de las cruces, y admitian con el episcopado su esencial superioridad sobre los presbíteros, así como tambien varias ceremonias del culto.

Mas tarde nació tambien de su seno la secta de los *arminianos*, que modificaba las opiniones de Calvino, en sentido mas aproximado al catolicismo, y cuyas doctrinas, á pesar de haber sido condenadas en el sínodo Dordrecht, en 1619, fueron y continúan admitidas en varias partes.

Resulta, pues, que además de estas dos confesiones, que pueden llamarse madres de la de Augsburgo para los luteranos, y la Helvética para los calvinistas, existen otras varias, hijas, ó filiaciones de aquellas. A la primera filiacion pertenecen la *confesion sajona*, hecha en Wittemberg, en 1551, para presentarla en el concilio de Trento.

Siguese aun la de Federico, elector palatino, publicada en 1577, segun lo ordenado en su testamento.

La confesion *de los bohemios*, aprobada por Lutero y Melanchton, y publicada en 1535.

La declaracion *consensus in fide*, formada para las iglesias de Polonia, en el sínodo de Landomir, en 1570.

A la segunda corresponden la confesion de

fé, que los calvinistas franceses presentaron en el colegio de Poissy, en 1561, compuesta por Teodoro Beza, discípulo predilecto de Calvino, y que firmaron la reina de Navarra, su hijo Enrique IV y varios señores notables del partido hugonote.

La confesion *anglicana*, redactada en un sínodo de Lóndres, en 1562, y publicada en el mismo reinado de Isabel, en 1571.

La *de los escoceses*, hecha por el Parlamento de aquel reino, en 1568.

La *confesion belga*, compuesta para las iglesias de Flandes, en 1561, y confirmada en el sínodo de Dordrecht, en 1619.

La de los *calvinistas polacos*, hecha en el sínodo de Czenngel, en 1570.

Y por último, la de las cuatro ciudades imperiales Strasburgo, Lindau, Memmingem y Constanza, presentada á la Dieta de Augsburgo, en 1530.

Véase la obra *Coleccion de las confesiones de las iglesias reformadas.*

CONFESION EXTRAJUDICIAL. La verificada fuera del juicio, en que se la hace, ó quiere hacer servir. Por consecuencia, la hecha en otro juicio: ante juez incompetente: particularmente de palabra, por escrito, por cualquiera de los numerosos medios con que los hombres se comunican, y trasmiten sus hechos, ó conceptos en la sociedad, salvo aquellos que por la ley constituyen plena prueba, como una escritura pública; pues sabido es que la confesion extrajudicial no la hace; sino que viene al juicio como presuncion, y dato de prueba, sujeto á la apreciacion judicial.

Lo es tambien lo que se hace al juez competente, pero en forma confidencial ó privada.

Tambien la *confesion extrajudicial* puede ser *tácita*; cuando se supone hecha en virtud de algun acto, del que se infiere la certeza de la pretension contraria: por ejemplo, el que paga, ha confesado tácitamente que debia, porque si no, hubiera resistido el pago. Contra esta confesion tácita se admite prueba de que se ha pagado por error, y aun los militares, labradores, mujeres y menores de catorce años no tienen necesidad de probar que erraron, sino que les basta alegar que no debian lo que tácitamente confesaron con el hecho de pagar; y el que recibió el dinero ha de justificar la certeza de la deuda: si no la justificase, ha de devolver lo cobrado; porque se presume que no se le debia, y que el militar pagó por ignorancia y los demás citados, *por mengua de seso.*

La confesion extrajudicial plena, en causas civiles, produce, por regla general, prueba plena, si no la niega despues en el pleito (1), si la niega, solo produce presuncion.

La confesion, que un deudor hiciese de la deuda á presencia de dos testigos y de su adversario ó procurador, con palabras claras y terminantes, especificando la cantidad y la justa razon de la deuda ó de la obligacion de dar la cosa, forma plena prueba, releva al contrario de probar, y basta para fallarse por ella (2).

El confesante, sin embargo, puede desvirtuar su confesion por otras pruebas contrarias. Si no espresase la razon ó causa de deber, y no constase por los antecedentes; la confesion extrajudicial no tiene fuerza, si se revocase despues, sin que se pueda condenar por ella sola al confesante (3) á no ser que fuese *in articulo mortis*, en cuyo caso la confesion sin causa, por presumirse hecha en descargo de la conciencia y teniendo presente la vida eterna, vale, no siendo en perjuicio de tercero (4).

Para que la confesion extrajudicial con causa exima del cargo de probar al contrario, ha de hacerse á presencia de éste ó de su procurador, porque entonces se infiere que la hace deliberadamente y no por imprudencia ó ligereza; y al presentarse en juicio, ha de aceptarse por la parte á quien favorece, para que no pueda revocarse.

Si no estuvieran presentes, ni el adversario, ni su procurador, por la confesion no queda

(1) Sent. del Trib. Sup. de 4 de Junio de 1860; ley 7.ª, tít. 13, Part. 3.ª

(2) Ley 7.ª, tít. 13, Part. 3.ª

(3) Id. Greg. Lop., á esta ley y á la 4.ª del mismo artículo.

(4) Castill. *Quot. controvers. jur.*, lib. 5.º, cap. 3.º, núm. 8 y 10.

obligado el confesante (1), formando solo presuncion, á no ser que la confesion prestada en ausencia de la parte contraria, estuviese hecha en escrito, que no impugnase; ó fuese jurada, ó se aceptase por alguno en nombre de aquel, en cuyo beneficio ceda, y éste aprobase, ó ratificase despues la aceptacion; ó se confesase la misma cosa dos ó mas veces con intermision de tiempo, en cuyos casos, segun los autores, prueba plenamente (2).

La confesion hecha en testamento, confirmado con la muerte, y estando el confesante en su cabal juicio, vale contra él y los suyos; no contra otro, sin otra prueba (3).

La confesion de deuda por testamento obliga al heredero. Si se debia algo al acreedor, solo lo que se le debiese; si no se le debia nada, y el testador lo sabia, todo; por entenderse legado (4). Si el testador confiesa estar pagado de una deuda, no pueden reclamarla los herederos (5). Si el testador confiesa que el legatario le hizo tal servicio, ú honra, y que por ello le deja el legado, no se admite prueba en justificacion de que es falsa la causa, y por ello ineficaz lo confesado, como fundada en un error (6).

La confesion de deuda en favor de una persona, incapacitada por la ley para recibir del confesante, no hará prueba contra los legítimos herederos, porque se presume en fraude de la ley, y en beneficio del favorecido. Así es que, si dejando el padre á un hijo natural cuanto puede, segun derecho, confesase en testamento, ó por contrato entre vivos, que le debia cierta cantidad, no tienen obligacion los herederos de pagarla, á no ser que por escritura ó cualquier otra prueba distinta de la confesion, justificase que verdaderamente se le debia (7). *Confesio facta in favorem incapacis, præsumitur fraudulenta.*

La confesion, estendida por los padres en escrito ó asiento formal, de cuya autenticidad no se dude, sobre anticipaciones hechas á sus hijos por razon de colocacion ó establecimiento, se tienen asimismo por prueba completa (1), porque á las notas, escritas por el difunto, se les concede el mismo valor, que si fuere una solucion jurada (2); aunque en nuestro concepto siempre le quedará al hijo salvo el derecho de prueba en contrario; porque de otro modo podria perjudicarse á la legítima de los hijos, y beneficiarse á uno en fraude de la ley.

Si el testador confiesa en su testamento que debe á alguna persona una cantidad, que recibió prestada, y luego lo revoca por otro posterior, en que no habla de dicha deuda; por la confesion del primero, no puede reclamarse el crédito; porque la confesion, sigue la suerte del testamento, y revocado éste, queda revocada aquella. Solo en el caso de que en el testamento la confesion fuese hecha como por contrato entre vivos, esto es, presente el acreedor y aceptante; no quedará revocada, aun cuando el testamento se declarase nulo por la existencia de otro posterior (3).

La confesion, hecha por el padre, de que el dinero que se encuentre en su herencia, pertenece á tal hijo, no perjudica á los otros, sino fuese hecha con juramento, y hubiese verosimilitud de su certeza; como por ejemplo, si el padre fuese pobre y el hijo empleado, ó rico. La confesion de deudas, hecha por el padre, y que perjudica las legítimas de los otros hijos, no tiene fuerza alguna, y por lo tanto es inútil la confesion del padre, hecha en testamento, de que tal deuda, ó el precio de tal finca, fueron pagadas por tal hijo; á no ser que hubiere algunas pruebas ó presunciones de la certeza de los hechos confesados. Y la razon es evidente: en todo lo que puede existir sospecha de fraude, como es en las donaciones á personas prohibidas, no basta la afirmacion y confesion de la parte, aunque sea con juramento, sino que requiere verdadera y actual prueba (4).

(1) Greg. Lop. á la ley 7.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(2) *Cur. filip.*, Part. 1.ª, §. 17, núm. 6.
(3) Ley 2.ª, tít. 7.º, lib. 2.º, Fuero Real.
(4) Ley 19, tít. 9.º, Part. 6.ª
(5) Escrich, *Dicc. razon.*, art. CONF. EXTRAJ.
(6) Leyes 20 y 21, tít. 9.º, Part. 6.ª
(7) Ley 3.ª, tít. 11, Part. 3.ª

(1) Escrich, *Dico. razon.*, art. CONF. EXTRAJ.
(2) Castillo, lib. 4.º, cap. 50, núm. 31.
(3) Castillo, lib. 5.º, cap. 111, núm. 4.
(4) Castillo, *Quotid. controv. jur.*, lib. 5.º, cap. 3.º, núms. 10, 12 y 13.

La confesion, hecha por el marido, antes ó durante el matrimonio, de haber recibido la dote, cuya entrega no constare, ó constare solo por documento privado, no surtirá mas efecto que el de las obligaciones personales, sin que pueda, en virtud de esta obligacion, exigir la mujer que á la seguridad de ella, le constituya el marido hipoteca especial (1).

Mas si el marido, antes de la celebracion del matrimonio ó dentro del primer año, confesase haber recibido la dote, tiene obligacion de prestar hipoteca en seguridad de aquella, en cualquier tiempo que la exija la mujer, con tal que esta haga constar judicialmente la existencia de los bienes dotales, ó la de otros semejantes ó equivalentes, en el momento de deducir su reclamacion (2).

Si la mujer no pudiese probar la entrega por medios independientes de la confesion, no perjudica ésta á tercero (3), ni aun cuando se hiciese *in articulo mortis*, de dote recibida constante el matrimonio. Se esceptúa el caso de que la mujer justificase que el marido habia prometido la dote anteriormente, porque cesa entonces la sospecha de fraude, aunque se admite prueba en contrario.

Confesándose por el marido como recibida, mayor dote, que la que le habian prometido, hay sospecha de fraude, respecto al esceso, é incumbe á la mujer la prueba. Se mantendrá, sin embargo, la confesion, si fuese hecha en testamento y cupiere en el quinto ó en el tercio, porque en tal caso el esceso se consideraria como legado, respecto á los descendientes ó ascendientes, ó sacándose del cuerpo de la herencia, bajadas primero las deudas, si heredase algun estraño (4).

Si la confesion de dote recibida la hiciese el marido por contrato entre vivos, y no constase la entrega, puede oponer la escepcion *non numeratæ dotis*, dentro de dos años; y si el matrimonio se disolviese antes de estos dos años, dentro del siguiente, á la disolucion; pero trascurrido dicho término sin oponer la escepcion, perjudica la confesion al marido y á sus acreedores, trasladando á estos la carga de probar que la dote no fué entregada. Pero si el marido lo confesase, antes de ser trascurrido el término legal, ó renunciase dicho término, perjudica solo al marido y no á los acreedores, segun la opinion comun de los autores, que en esta última cuestion se han dividido (1). Parece fundado que solo tendrá esto lugar, cuando haya motivo racional para creer que la confesion se hizo con ánimo de defraudarles (2); principio, por el que se declaran nulas las confesiones ó reconocimientos de capitales, hechos por un cónyuge en favor de otro, en los seis meses precedentes á la quiebra de un comerciante, sobre bienes que no fuesen de abolengo, ó los hubiese adquirido y poseido de antemano el cónyuge, en cuyo favor se haga el reconocimiento de dote ó capital, por cesar en el último caso la sospecha del fraude (3).

Igualmente puede anularse, como hecha en fraude de los acreedores, toda confesion de recibo de dinero, ó efectos, á título de préstamo, que, hecha seis meses antes de la quiebra, en escritura pública, no se acreditase por la fé de entrega del notario; ó habiéndose hecho por documento privado, no constase uniformemente de los libros de los contrayentes.

La confesion, hecha en testamento por el marido, que tiene acreedores, ó herederos necesarios, de haber recibido cierta cantidad de su mujer, no vale; porque se presume hecha en fraude de la ley, que prohibe las donaciones entre marido y mujer (4): *Qui non potest donare, non potes confiteri*. Se sostendrá, sin embargo, como legado, segun dijimos antes al hablar de la dote.

La confesion de la mujer de que todos sus

(1) Art. 170 de la ley Hipotecaria.
(2) Art. 171, id., id.
(3) Sent. del Trib. Sup. de 20 de Junio de 1865.
(4) Castillo, *Quotid. contr. per.*, lib. 5, capítulo III, núm. 19 y sigs.; y lib. 8.°, cap. 36, §. 6.°, número 23; ley 19, tit. 9.°, Part. 6.°: art. 40 de la ley Hipotecaria.

(1) Castillo, *Quotid. controvers. jur.*, libro 8.°, cap. 36, §. 6.°, núm. 16 y sigs.
(2) Sent. del Trib. Sup. de 26 de Mayo de 1857.
(3) Art. 1041 del Código de Comercio.
(4) Castillo, *Quotid. controvers. jur.*, lib. 5.°, capítulo III, núm. 10.

bienes los habia entregado en dote á su marido, la perjudica para que no pueda repetirlos, como parafernales (1).

La confesion de los padres no prueba el matrimonio, ni la filiacion, en perjuicio de tercero (2); ni la de la madre puede perjudicar al hijo, acerca de la filiacion; ni la del padre, ni su negativa, despues que le hubiese tratado como hijo (3).

Cuando la confesion reune todas las circunstancias, que exige la ley de Partida, para que haga plena prueba, si la Sala sentenciadora no la tuviese por bastante para fallar en contra del confitente, se da el recurso de casaçion; porque la fuerza de la conoscencia no depende de la apreciacion del Tribunal, sino de la declaracion de la ley; advirtiéndose que se reputa confesion bastante, no solo la que reconoce espresa y directamente el hecho principal; sino la que reconoce otros posteriores, que prueban de una manera indudable la existencia de aquel. Así es que se considera confesado un contrato, cuando se reconocen documentos de puño y letra del confitente, en que se refiere al contrato (4) y se considera confesada la eficacia de una escritura, cuando se confiesa que se han realizado y utilizado los derechos y ventajas, que por ella se le concedieron al interrogado (5).

Sobre el valor probatorio de la confesion extrajudicial, así en lo criminal, como en lo civil, véase el principio general, consignado á la cabeza de este artículo.

CONFESION JUDICIAL. La que se presta en juicio, y por tanto ante un juez real ó eclesiástico, para efectos civiles ó penales, temporales ó eclesiásticos, segun los respectivos casos; y entendiéndose del juicio eclesiástico esterno, pues no se sujeta á estas reglas el juicio y tribunal de la penitencia.

(1) Castillo, *Quotid. controvers. jur.*, lib. 4, cap. 40, núm. 39.
(2) Idem, id., lib. 6.°, cap. 125, núm. 15 y siguientes.
(3) Idem, id., lib. 6.°, cap. 125, núm. 13 y siguientes.
(4) Sent. del Trib. Sup. de 21 de Setiembre de 1859.
(5) Idem id., de 1.° de Marzo de 1861.

CONFESION JUDICIAL (EN LO CIVIL). Entre los medios eficaces de conviccion judicial, ninguno mas que el de la confesion de parte. Nadie puede conocer mejor un hecho, ó concepto, que el propio autor. Nadie mas interesado que el mismo, en convertirlos en su provecho y defensa. Por ello, cuando llega á confesarlos, nada mas persuasivo.

Pero la confesion es un hecho humano. Puede proceder de diversos móviles, que influyen en su índole y para su apreciacion. No puede ser del mismo valor y eficacia en todas las situaciones y en toda clase de personas; espontánea ó arrancada; cierta ó vaga; esplícita ó perpleja: la confesion misma, en fin, por las circunstancias mencionadas y muchas mas, que se alcanzan, apreciada la condicion de los hechos humanos, tiene que ser juzgada por el juzgador. La jurisprudencia ha querido ilustrar y fortificar su juicio por cuantos medios suministran el criterio racional y el jurídico; y, consultando hasta la facilidad, ha concretado sus conclusiones, ó sean los requisitos de la confesion, legalmente eficaz, en los siguientes dísticos:

Major, sponte, sciens, contra se, ubi jus fit, et hosti.
Certum, lisque, favor, jus nec natura repugnet.

La propia jurisprudencia los esplica así:

Major: espresa que el confesante sea mayor de edad, ó que siendo menor, pero de mas de 14 años, preste la confesion á presencia de su curador, sin que este la contradiga; pudiendo siempre pedir la restitucion *in integrum*, si recibiese algun grave perjuicio por ella, probando que habia confesado por ligereza ó por yerro (1).

Sponte: que la confesion sea libre, hecha de grado; y no arrancada por la fuerza del tormento, amenaza de muerte ó deshonra, ó miedo que cae en varon constante; porque todo esto coarta la libertad, é impele á los hombres muchas veces á confesar cosas, que voluntariamente no confesarian (2). Y si el juez, la parte interesada ó cualquier otro,

(1) Leyes 1.ª y 3.ª, tit. 13, Part. 3.ª
(2) Ley 4.ª, id., id.

con desprecio de la ley, amenazase al interrogado, para que confesase á su sabor, tal confesion seria nula y no empece al que así la hizo (1).

No prohibe terminantemente la ley el que, para inducir á confesar alguna cosa en pleito civil, se empleen promesas, dádivas, engaños ú otro artificio cualquiera; pero en nuestro concepto semejante confesion no produciria los efectos de la ley, y el criterio del juez la daria la fuerza que creyese debia tener, atendidas las circunstancias del caso, combinadas con las demás pruebas del juicio: que muchas veces las promesas y los artificios tuercen el albedrío, cual lo tuercen las amenazas.

Como á la libertad moral, se oponen el estado de enajenacion mental, la debilidad del entendimiento, ó la equiparacion que hace la ley de los pródigos con los faltos de seso; claro es que el confesante ha de estar en su cabal juicio, y no privado de la administracion de sus bienes; pues si el furioso, pródigo ó desmemoriado, confesasen en su perjuicio, seria nulo el acto; y si por ellos confesase el curador cosa gravemente perjudicial á los mismos, tendrian tambien el remedio de la restitucion (2).

La confesion, hecha en un arrebato de cólera ó despecho, por punto general solo perjudica al que la hace, si la ha prestado á instancia de parte y despues la ratifica ante juez competente; pero si no la prestase á instancia de parte, ó no ratificase ante juez competente asimismo, ó la hubiese prestado fuera de juicio, tal confesion nada vale (3).

Sciens: que se haga á sabiendas, á cierta ciencia, *cum animo confitendi*, y no por ignorancia ó error. En el caso de que confesase por ignorancia, puede reclamar contra la confesion, antes que se dé juicio acabado sobre aquel pleito (4); porque los que yerran, no consienten (5). Así es que, si un heredero confesase ser deudor de un legado, creyendo que se contenia en el testamento, y despues resultase que no, puede revocarse la confesion, por error de hecho (1). En vista de esta ley, convienen los autores en que no perjudica la confesion hecha por error, aunque el confesante la hubiese ratificado despues, y aunque concurran otros indicios á confirmar la verdad de aquella confesion, que se supone prestada por error. Será este un indicio mas; pero se admitirá prueba en contrario. Si no probare el error, la confesion valdrá, pues no basta alegarlo (2).

Si el error de la confesion se funda en un documento y despues, por la fuerza de las pruebas, quedára destruido, de hecho queda igualmente destruida la confesion, porque, como basada en la falsa creencia de la validez del documento, destruida la causa, quedan destruidos los efectos; como si uno confesase deber un legado, y despues se declarase falso el testamento, en que se dejaba, ó revocado por otro posterior.

Segun los autores, el error de la confesion retractable ha de ser de hecho: en el caso de que fuese de derecho, ha de distinguirse si recae sobre una obligacion natural, ó no existia obligacion de ninguna especie. En el primero, no podia invalidarse despues de la confesion, alegando ignorancia, porque se presume que todos saben las leyes, y que cuando uno confiesa una obligacion natural, de que solo dispensa la ley civil, ha querido hacer renuncia del beneficio. Así es que, si demandándose una deuda, el demandado confiesa que la debe, y se le condena al pago, no podrá luego revocar su confesion, alegando que la deuda estaba ya prescrita, por pasar de treinta años, y que, si la ha confesado, ha sido porque ignoraba que el trascurso del tiempo, era capaz de librarle de ella.

Corroborando los propios autores esta doctrina, añaden «que no puede retractarse la confesion judicial, bajo pretesto de no haberse

(1) Ley 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(2) Ley 1.ª, id., id.
(3) Glos. de Ant. Gom. á la ley 9.ª, tít. 14, Partida 3.ª
(4) Ley 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(5) Ley 116, *De divers. reg. jur.* D.

(1) Ley 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(2) Sent. del Trib. Sup. de 20 de Febrero de 1861, y 20 de Marzo de 1866.

prestado, sino á consecuencia de un error de derecho; porque el error, que no es otra cosa que la ignorancia de la ley, no destruye aquí la verdad del hecho confesado, y esta confesion no produce por sí misma una obligacion á cargo del confesante; sino que solo establece un hecho relativo á una obligacion, que ya existia: de modo que es únicamente una prueba de un hecho verdadero, que ya no puede ponerse en cuestion. Así que, si en lugar de oponer la prescripcion de tres años al especiero, que me pide el pago de los géneros que me ha suministrado, confieso haber recibido los géneros, y no haber satisfecho su importe; no podré despues revocar la confesion, alegando que la hice por ignorar la ley, que me autorizaba á invocar la prescripcion de la deuda, porque, como la prescripcion de la deuda en este caso está solo fundada en la presuncion del pago, mi confesion ha venido á destruir esta presuncion, y por consiguiente los efectos de la prescripcion, á que se supone he renunciado» (1).

Pero si el error de derecho recayere sobre una cosa que no se debia, natural, ni civilmente, puede anularse la confesion, segun opinion del mismo, fundado principalmente en las leyes romanas, que admitian la ignorancia del derecho (2), y en la de Partida que sancionaba el principio en ciertos casos, respecto á mujeres, labradores, y militares (3). Y, como ante todo es la verdad y la justicia, y como que seria contrario á la equidad el que, por una confesion errónea, se confiriesen derechos al que ninguno tenia; y como el del que pide ha de tener un fundamento, que no ha de consistir únicamente en el error, ó creencia equivocada de un tercero; de aquí el que tal confesion pueda anularse.

Sin embargo, si contra la doctrina de que el error de derecho á nadie escusa, ni favorece (4), se admite que hay casos, en que el error de derecho invalida la confesion; algunos se inclinan á que lo mismo puede invalidarse, recayendo el error de derecho sobre cosa que se debe por obligacion natural, que recayendo sobre cosa que no se debe natural, ni civilmente; contra la doctrina de autores, que aplican á las confesiones erróneas las doctrinas, que, como mas seguras, se siguen en la paga de lo indebido.

Y, en verdad, no son despreciables sus razones. La ley establece: «Otrosí: decimos »que si alguno ficiese confesion o niega por »yerro en juicio *sobre alguna cosa*, *o so*»*bre algunt fecho*, que non le empece a »aquel que la fizo, si pudiere probar el yerro» (1).

Si la ley se entiende de manera que las palabras, *sobre alguna cosa, o sobre algunt fecho*, se refieren a *conoscencia*, es decir que la conoscencia es la que versa sobre cosa ó fecho, la ley no comprende mas que los errores materiales, los errores de hecho.

Pero si las palabras, *sobre alguna cosa ó sobre algun fecho*, se refieren á juicio, de modo que el juicio es el que versa sobre cosa ó hecho, pero no la conoscencia, la ley comprende todas las conoscencias erradas, háyanse otorgado sobre errores materiales ó legales, de hecho ó de derecho, y aventurado es hacer distinciones, donde la ley no distingue.

Al otro argumento de que quien confiesa deber lo que no tiene obligacion civil de pagar, se presume que renuncia los beneficios que la ley le concede, oponen no menos robustos argumentos; y es mas lógico suponer en tales casos error ó alucinacion.

Cierto es que se presume que todos saben las disposiciones legales; mas solo en cuanto la ignorancia no puede escusar de la infraccion de los que imponen obligaciones, ó están basadas sobre los preceptos de la ley natural; ni validar actos, que exigen requisitos y solemnidades especiales.

Los derechos que las leyes conceden, aunque se presumen sabidos por las partes, pue-

(1) Escrich, *Dicc. razon.*, art. ERROR.
(2) Leyes 7.ª y 8.ª D. *de jur. et fat. ignorant.*
(3) Ley 21, tit. 1.º, Part. 1.ª
(4) Sent. del Trib. Sup. de 20 de Febrero de 1861.

(1) Ley 5.ª, tit. 13, Part. 3.ª

den ignorarse; y esta ignorancia y aquella presuncion llevan la carga de tener que probar el error el que confiesa, relevando por la confesion á su contrario; pero no la de que se sentencie, sin permitirle alegacion en contra.

Si se entendiere que el confesante renunciaba un beneficio que le concedia la ley, deberiase entender que hacia una donacion al litigante contrario; y la donacion, como toda enajenacion de derechos, debe constar clara y terminantemente, porque, para que se entienda donacion, es necesario la certeza, de que se dá, sabiendo que no se debe (1).

Contra la presuncion de que renunciaba el beneficio de la ley, está la declaracion espresa de que no lo renuncia, en el juicio conciliatorio, en la contestacion á la demanda, en el mismo hecho de seguir el pleito, que no seguiria, si estuviese conforme en el derecho del litigante contrario.

Para que se entendiese renuncia de derecho, era menester que supiese que lo tenia, si el confesante lo ignoraba: por esta creencia no puede entenderse renunciado el derecho que le compete: no es su ánimo perder un derecho, sino reconocer una obligacion anterior.

Si está admitido comunmente que la obligacion por error de derecho es nula, y tan solo se disputa sobre si llevada á efecto y consumada por la entrega, se podia repetir la cantidad entregada; por fuerza hemos de convenir en que la confesion, que propiamente no es mas que el reconocimiento de una obligacion, no puede tener fuerza mayor, que la que tendria la misma obligacion errónea: la tradicion errónea no siguiéndose la tradicion, es nula; laconfesion ó sea el reconocimiento erróneo de una obligacion, no siguiéndose la tradicion, debe serlo igualmente.

Si confiesa que debe, y existia una obligacion natural de la deuda confesada, no ha creado por ello ninguna obligacion nueva; no ha hecho mas que reconocer la antigua, tal cual era en el tiempo en que se contrajo; pero no se privará, por el reconocimiento, de los beneficios que la ley le concede en virtud de hechos posteriores, y que puede oponer como escepciones.

El error ha de justificarse, antes de que se dé sentencia ejecutoria: por consiguiente cabe en el juicio apelado, puesto que aquella todavia no se ha pronunciado. Gregorio Lopez, en su glosa á la ley 3.ª, tít. 13, Partida 3.ª opina, que, cuando alguno ha padecido error, inducido á él por las palabras de su adversario, puede correjirlo, aun despues de proferida sentencia; porque, si bien en rigor de derecho es inútil intentar la revocacion de lo confesado erróneamente despues de sentencia, con todo, si se alega un error probable, puede tambien darse lugar á ella por via de restitucion. Duro es el estremo; puesto que fundadas tales opiniones en solo leyes romanas, las juzgamos rechazadas por la ley de Partida que terminantemente dispone: que el error se ha de probar, «ante que sea dado juicio acabado, *ca despues non podria ser desfecho el yerro* (1).» La ley ha señalado un término para utilizar el derecho: pasado ya, no puede utilizarse: si ha transcurrido, sabiendo el confitente que despues no podia alegar el error, porque lo ha renunciado; si ignorándolo, porque de leyes que imponen obligaciones, como hemos dicho, no puede alegarse ignorancia.

Contra se: que el confesante la haga contra sí mismo, ó para obligarse á otro, no en favor suyo, ni en contra de un tercero, porque si confesase cosa, que fuese en perjuicio ajeno, su dicho en asuntos civiles tendria tan solo la fuerza que el de cualquier testigo, que podria utilizarse y refutarse. La confesion, como tal, no sirve para perjudicar á un tercero, decian las leyes romanas, sino como espresaba Ulpiano; *ut confitendo, vel mentiendo, sese oneret* (2).

Ubi jus fit: que se haga ante juez compe-

(1) Ley 30, tít. 14, Part. 3.ª

(1) Ley 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª

(2) Ley 4.ª, *de interrogat. in jur. fact.* D. Ley 2.ª, tít. 7.ª, lib. 2.º Fuero Real. Sent. del Trib. Sup. de 6 de Febrero de 1863, 5 de Mayo de 1865, 28 de Abril de 1866 y 28 de Junio de 1852.

tente, ó de su órden, ante alguacil ó escribano (1); pero si el pleito fuese grave, y en todo caso en lo criminal, ha de recibirse la confesion por el mismo juez, sin cometerla á otra persona, y no cumple, aunque la confesion se ratifique ante él, habiéndola ya recibido el escribano (2).

Si alguno fuese juzgado por un tribunal compuesto de tres jueces, y confesase ante dos, tal confesion no prueba contra él, porque la persona moral del juez la componen los tres juntos, y los dos no forman tribunal (3), á no ser que alguno de ellos reciba la confesion á nombre, y en representacion de todo el tribunal, como juez de instruccion (4).

El juez de paz se considera como un amigable componedor, y no juez competente para recibir la confesion: por lo tanto, la hecha en juicio de paz, se considera estrajudicial (5). Como los árbitros han de proceder con arreglo á las solemnidades de derecho, están reputados verdaderos jueces, y por lo tanto la confesion, hecha ante ellos, tiene la misma fuerza que la prestada ante el juez ordinario. No así la verificada ante el arbitrador, que no se considera como verdadero juez; sino como un amigable componedor, sin verdadero carácter judicial, y sin que ante él haya verdadero juicio.

Et hosti: esto es, que tenga lugar delante del litigante contrario, ó de su procurador: requisito tan necesario, segun la ley de Partida, que despues de enumerar varios, para que las conocencias tengan toda la fuerza que el derecho les concede, añade: «E *sobre todo* que sea fecha en juicio, estando su contendor ó su personero delante» (6).

En la práctica, sin embargo, no solia presenciar la parte la confesion del contrario, y en la actualidad se reputa suficiente que de toda confesion judicial se de vista sin dilacion al que la hubiese solicitado, quien puede pedir que se repita para aclarar algun punto dudoso y sobre el cual no se haya respondido categóricamente (1).

Dudábase antes si era absolutamente necesaria, ó no, la aceptacion de la confesion por parte del que la habia pedido y se hallaba presente á ella; inclinándose la mayoría de los autores á la afirmativa; pero en la actualidad, visto el art. 297 de la ley de Enjuiciamiento, juzgamos que no es necesaria la aceptacion espresa. En él no se impone tal obligacion al preguntante: además se presume siempre aceptado lo que favorece, y se hace á instancia del favorecido con tal objeto; debiendo darle inmediatamente vista de la confesion, para que pida, ó no, aclaraciones, no es dudoso que en el primer caso se conforme con ella en los términos que se ha rendido, y en el segundo, con las aclaraciones que pretenda.

Certum: la confesion ha de recaer sobre cosa ó cantidad ó hecho cierto y determinado. Si exigiéndole al demandado confiese ser cierto que debe 100 duros, contestase que en efecto debia alguna cantidad; esta confesion, como de cosa incierta, no le perjudica; pero el juez puede obligarle á que conteste esplícitamente (2). *Certum pro judicato erit*; *incertum non erit* (3).

Lisque: que la confesion se haga en juicio; pues en otro caso es estrajudicial, cuyos efectos son diversos, como vemos en su lugar.

Favor: que la confesion no sea en favor del mismo confesante, porque supuesta su parcialidad y propio interés, lo que afirme en pró suyo no tiene fuerza ninguna, si no lo prueba; ni perjudica al contrario, á no ser que la confesion se hiciese bajo juramento decisorio, en cuyo caso concluiria el pleito; no por la fuerza de la confesion; sino de la obligacion voluntaria, contraida por el pre-

(1) Leyes 4.ª y 5.ª, tít. 28, lib. 11, Nov.
(2) Ley 6.ª, tít. 9.º, lib. 11, Nov.
(3) Jarin, *De sex. conf.*, quest. 81, cap. 1.
(4) Art. 37 de la ley de Enjuiciam. civil.
(5) *Bolet. de jurisp. y legisl.* tom. 3, pág. 139, nueva série: Santpous, glos. á la ley 6.ª, tít. 13, Part. 3.ª: Sent. del Trib. Supremo, de 7 de Febrero de 1863 y 20 de Diciembre de 1865.
(6) Leyes 2.ª y 4.ª, tít. 13, Part. 3.ª

(1) Art. 297 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Leyes 4.ª y 6.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(3) Sent. del Trib. Sup. de 4 Octub. de 1860 y de 13 de Nov. de 1866.

guntante, de pasar por lo que dijese el preguntado (1).

Jus, nec natura repugnet: que no sea contra naturaleza, ni contra ley, como si confesase el interrogado que era su hijo el que tuviese menos edad que él; de parte de la mujer casada, que no son hijos del matrimonio los nacidos en él (ley 9.ª, tít. 14, Part. 3.ª); de un casado que tiene un impedimento dirimente que anula el matrimonio (leyes 4.ª y 6.ª, título 13, Part. 3.ª). Y no es que las manifestaciones del tercero y cuarto caso no puedan producir efecto en juicio, y en su caso, en union de otros datos, ó medios de prueba; sino que no son confesion que cause plena prueba (ley 6.ª, tít. 1.º, Part. 3.ª).

Los requisitos anteriores se refieren mas bien al fondo que á la forma, mientras hay otros á la inversa, segun vamos á recorrerlos.

Confesion esplícita, espresa: la que se hace con palabras ó señales que clara y positivamente manifiestan lo que se confiesa, sin ambigüedad ni duda alguna.

Tácita, que tambien se dice *ficta*: la que se deduce de los hechos reconocidos, ó supuesto asentados: así el que paga, ó pagó, confiesa que debia.

Simple: la que lisa y llanamente afirma ó niega el hecho.

Cualificada: la que modifica el hecho confesado: confiesa Pedro que debia cien duros, pero que los pagó.

Dividua: cuando la circunstancia ó cualidad, que se añade á la confesion, puede segregarse del hecho, objeto de la pregunta, como sucede en el ejemplo anterior, en que la devolucion del dinero es un hecho posterior, independiente y separado del préstamo.

Individua: cuando la circunstancia añadida al hecho fundamental, no puede separarse de él: Pedro confiesa que se le prestaron cien duros; pero á pagar á cierto plazo.

Las reglas generales que preceden, no solamente son de criterio racional y jurídico; sino en su mayor parte de ley (ley 4.ª y siguientes, tít. 13, Part. 3.ª). Tienen su principal aplicacion, en la confesion en lo civil, en la confesion por antonomasia; pero el criterio judicial las aplicará respectivamente y con utilidad, en las demás especies de confesiones, como la que tiene lugar en lo civil por reconocimiento, por concesion espontánea en las alegaciones, la confesion en lo criminal, y por último en la estrajudicial, que tratamos en artículo aparte.

La confesion, en todas sus especies, se llama conoscencia en las leyes de Partida (dicho tít. 13, Part. 3.ª).

Confesion, por antonomasia, segun acabamos de indicar, es aquella, que en los juicios civiles, equivale á plena prueba, como lo es principalmente la que se obtenia por medio de *posiciones*, y hoy al tenor de la ley de Enjuiciamiento civil, artículos, que se citarán.

De esta confesion, que sin mas pruebas, ni mas trámites, autoriza á dictar desde luego sentencia definitiva, se dice con razon, que equivale á *cosa juzgada*, la tratan de un modo las leyes de Partida; de otro las leyes recopiladas; de otro, en fin, bien embarazoso por lo que diremos, la ley de Enjuiciamiento civil.

Las leyes de Partida la llaman *conocencia* (todo el tít. 13, Part. 3.ª), esponiendo lo conveniente sobre el juramento, que debe acompañarla (tít. 10, id.).

Las leyes recopiladas la presentan bajo la especial y conocida fórmula de *posiciones*, de tan estricta y decisiva interpretacion, como es sabido, coincidiendo en gran parte y totalmente, en lo sustancial, con las leyes de Partida.

La ley de Enjuiciamiento, en fin, la trata con mayor generalidad; no la denomina *conocencia*; ni *posiciones* á la forma judicial de obtenerla; sino *declaracion*: cuando en la jurisprudencia general, eran tan esencialmente diferentes la pregunta, ó simple interrogacion probatoria, y la *posicion*; y tan diversos sus efectos. ¿Es que dicha ley ha suprimido esa diferencia? ¿Es que hay que entenderla é interpretarla, determinando su valor respectivo.

(1) Ley 4.ª, tít. 13, Part. 3.ª: ley 2.ª, tít. 7.º, libro 2.º, Fuero Real: art. 294 de la ley de Enjuiciamiento civil.

por las mencionadas leyes de Partida y recopiladas, y por las reglas de la jurisprudencia general? Pero la misma ley de Enjuiciamiento, en su artículo final, declara «derogadas todas las leyes y Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros, en que se hayan dictado reglas para el enjuiciamiento civil»: ¿se entenderán omnímodamente derogadas todas las mencionadas disposiciones, ó solo en cuanto se opongan á la ley de Enjuiciamiento civil? Tan perjudicial seria otra interpretacion, que nos inclinamos á creerlo así. El tenor mismo de la ley no lo resiste: así vienen entendiéndolo los tribunales, pues que aplican en sus casos, ya como supletorias, ya como esplicatorias, las de Partida, y las recopiladas, y así deberá entenderlo la jurisprudencia. Hé aquí ahora el tenor de la ley de Enjuiciamiento.

«Artículo 279. Los medios de prueba de que puede hacerse uso en los juicios, son..... 4.° confesion en juicio.»

Art. 292. Todo litigante está obligado á declarar bajo juramento, en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda, hasta la citacion para definitiva, cuando asi lo exigiera el contrario.

Art. 293. El que ha de ser interrogado, será citado con un dia de antelacion. Si no compareciere, se le volverá á citar, bajo apercibimiento de que, si no se presentase á declarar sin justa causa, será tenido por confeso.

Art. 294. Estas declaraciones podrán hacerse á eleccion del que las pidiere, bajo juramento decisorio ó indecisorio.

En el primer caso, harán prueba plena, no obstante cualquiera otras.

En el segundo, no perjudicarán mas que al que declare.

Art. 295. Las contestaciones deberán ser afirmativas, ó negativas, pudiendo agregar el que las dé, las esplicaciones que estime convenientes, ó las que el juez le pida.

Si se negare á declarar, el juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso, si persiste en su negativa.

Si las respuestas fueren evasivas, el juez le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos, respecto á los cuales, sus respuestas no fueren categóricas y terminantes.

Art. 296. El que haya sido llamado á declarar, deberá firmar su declaracion, despues de leerla por sí mismo; y si no quisiere, ó no pudiere hacerlo, despues de leérsela íntegramente el escribano.

Art. 287. Si el llamado á declarar no compareciere á la segunda citacion, sin justa causa; si rehusare declarar ó persistiere en no declarar afirmativa ó negativamente, á pesar del apercibimiento, que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso, si se pidiere, inmediatamente, y sin esperar á la sentencia definitiva.

Art. 298. De toda confesion judicial se dará vista sin dilacion al que la hubiere solicitado, el cual podrá pedir que se repita, para aclarar algun punto dudoso y sobre el cual no se haya respondido categóricamente; ó que se declare confeso al colitigante, si se halla en alguno de los casos, de que habla el artículo precedente.

Art. 299. La providencia que se dictare, declarando á alguno confeso, ó denegando esta declaracion, es apelable.

Art. 300. Interpuesta la apelacion, se admitirá por ante el superior correspondiente, continuándose, no obstante, la sustanciacion de los autos, hasta dictar sentencia definitiva.

Art. 301. Si se apelare de la sentencia definitiva, se remitirán los autos para decidir, tanto este recurso, como el interpuesto contra la providencia, en que se hubiere declarado al litigante confeso, ó denegado esta declaracion.

Art. 302. Si no se apelare dicha sentencia definitiva, ni se insistiere despues de dictada y dentro de los cinco dias, en la interpuesta con arreglo al art. 299, se estimará ésta abandonada, y consentida la providencia de que se interpuso.»

La declaracion equitativa y racional del artículo 299, autorizando apelacion de la declaracion del *confeso*, por virtud de confesion judicial, es muy de notar, como contraria á las leyes recopiladas, que en el mismo caso, hablando de las *posiciones*, la negaban.

Dado que, segun queda dicho, en los tribunales se aplica la legislacion de Partidas,

sobre conocencias, y las recopiladas sobre posiciones, en lo que no son contrarias á la de Enjuiciamiento civil, hé aquí algunas reglas prácticas, deducidas de ellas, que deberán tenerse presentes.

Es lo comun pedir la confesion en una sola vez; pero puede pedirse en dos ó mas veces en la misma instancia, con tal que los articulados sucesivos no versen sobre lo ya confesado claramente, ó sobre lo claramente negado; ni sean confusas, ó impertinentes al pleito, en cuyos casos no está el litigante obligado á responder á ellas, ni el juez debe mandarlo, ni aun admitirlas.

Citadas las partes para sentencia, está dicho que cesa la obligacion de la parte á contestar á preguntas de la otra; pero si el juez, para mejor proveer, se las hiciese, tendrá que contestarlas (1), porque el art. 292 de la ley de Enjuiciamiento solo le exime de contestar ya entonces, cuando lo exigiese la parte contraria; mas no cuando de oficio lo mandase el juez (2).

La razon del artículo, al prohibir al litigante las posiciones, despues de citarle para definitiva, es la presuncion de malicia y el estar el pleito perfecto por confesion de las partes que concluyeron: razones que no militan, cuando pregunta el juez, en el que no puede suponerse malicia, ni para él está cerrado el pleito, hasta que pronuncie sentencia; ni á nadie, mas que á él, compete apreciar, si los hechos se hallan suficientemente probados, y si pueden influir en la decision final (3).

De lo dicho se infiere, que puede pedirse la confesion por cualquiera de los litigantes, por los procuradores en su nombre, y por el juez de oficio, para inquirir la verdad; y deben prestarla únicamente los litigantes en persona, ó los procuradores ó abogados con poder especial, y no de otra manera (4).

Absueltas posiciones ó preguntas en primera instancia, no pueden en segunda repetirse sobre los mismos hechos (1) y es dudoso que se admitieran, aun cuando se alegase por el preguntante que no habian sido las contestaciones categóricas; porque sino lo eran, en su derecho estaba solicitando su repeticion con arreglo al art. 298 de la ley de Enjuiciamiento. Si se le dió vista, y nada dijo, convino en que estaban bien contestadas.

En la segunda instancia de los pleitos ejecutivos, no es admisible la de posiciones (2), á no ser que se hubieran propuesto en primera instancia, y no se hubiesen podido evacuar por falta de tiempo; cosa no difícil, si alguno de los litigantes se halla ausente.

Cuando la confesion no recae sobre el hecho fundamental, si no sobre otro hecho, por mas inductivo que sea, no perjudica al confitente, ni tiene precision, por lo tanto, de probar contra el hecho inferido (3).

El reconocimiento de cuentas, cartas ú otros documentos, en los que, aunque incidentalmente, conste *con toda claridad* la existencia de un contrato, equivale á la confesion del mismo contrato (4).

Contra lo confesado por la parte judicialmente, no se le admitirá al confitente prueba de testigos (5) á no ser que hubiere tachado la confesion de errónea y que los testigos fuesen el medio de probar el error cometido.

Ya queda espuesto, que citado el litigante en debida forma, está obligado á declarar contestando afirmativa ó negativamente, dando las aplicaciones que estime convenientes, ó que el juez le pida (6).

Primeramente se mandó que la contestacion fuese, *niego ó confieso, la creo ó no la creo* (7); mas despues se prohibió terminantemente la última fórmula (8).

(1) Sent. del Trib. Sup. de 27 de Abril de 1866.
(2) Ley 2.ª, tít. 12, Part. 3.ª, y art. 48 de la ley de Enjuiciamiento.
(3) Sent. del Trib. Sup. de 27 de Abril de 1866.
(4) Ley 2.ª, tít. 9.º, lib. 11, Nov.

(1) Sent. del Trib. Sup. de 28 de Octubre de 1864.
(2) Sent. del Trib. Sup. de 21 de Octubre de 1859.
(3) Sent. del Trib. Sup. de 28 de Diciembre de 1860.
(4) Id. id. de 21 de Setiembre de 1859.
(5) Art. 310 de la ley de Enjuicimiento.
(6) Ley de Enjuiciamiento, art. 298: ley 3.ª, tit. 13, Part. 3.ª: ley 2.ª, tit. 9.º, lib. 11, Nov.
(7) Ley 1.ª, tit. 9.º, id.
(8) Ley 2.ª, id., id.

Si se negare á declarar; escepto por la falta de citacion con la anticipacion debida, segun la opinion que hemos emitido, se le apercibirá en el acto de tenerle por confeso, si persiste en su negativa. Si las respuestas fueren evasivas, el juez le apercibirá igualmente, de tenerle por confeso, sobre los hechos, respecto á los cuales sus respuestas no fuesen categóricas y terminantes (1).

El preguntado ha de dar la contestacion en el acto, sin que deba el juez concederle término para deliberar, ni aun ayudarse de letrado. Del articulado, ó preguntas, no se le ha de conferir traslado; y si lo preguntado constase de dos ó mas partes, ha de responder á cada una separadamente, directamente, y con precision, y no indefinidamente, como *niégola como en ella se contiene, segun se propone*, so pena de habérsele por confeso en la parte en que así contestase (2). En la práctica siempre se le concede algun tiempo para reflexionar y recordar, con tal que sea á la vista del juez, y que no pueda ser aconsejado por nadie.

Dada la contestacion y leida por sí, ó íntegramente por el escribano, si no quisiere ó no pudiere hacerlo por sí mismo, deberá firmarla (3), y sin dilacion se dará vista al que la hubiere solicitado, el cual podrá pedir que se repita para aclarar algun punto dudoso, y sobre el cual no se haya respondido categóricamente, ó que se declare confeso al litigante, si se halla en alguno de los casos marcados por la ley (4).

Como las contestaciones han de ser afirmativas ó negativas, por fuerza han de versar las preguntas sobre hechos propios ó en que haya intervenido el interrogado, de modo que no pueda ignorarlos, y que sean convenientes al punto de que se trata. En otro caso, el reconocimiento, aun siendo terminante y absoluto, no constituye *conocencia* en juicio (5).

(1) Art. 295 de la ley de Enjuiciamiento: ley 1.ª, tít. 9.º, lib. 11, Nov.
(2) Ley 2.ª, id., id., id.
(3) Art. 296 de la ley de Enjuiciamiento.
(4) Art. 298 de la ley de Enjuiciamiento.
(5) Sents. del Trib. Sup. de 20 de Marzo de 1861, y 11 de Marzo de 1863.

Si la confesion se hiciese por procurador con poder bastante, en juicio ante su mandante, no le perjudica, ni es menester probar haya sido hecha por error, si la contradice luego (1); aunque Gregorio Lopez pretende que puede oponerse á ella dentro de tres dias, fundado en una ley romana, que así lo dispone respecto de los errores cometidos por el abogado. Creemos que la oposicion ha de ser en el acto, porque la palabra *luego* que usa la ley, así lo indica; y porque lo natural parece ser, que en el momento, en que el procurador por malicia ó yerro diga una cosa inexacta, la contradiga el interesado que lo oye, y que, callando, aprueba implícitamente la aseveracion del procurador. *Si tacuit, palam est eum voluisse: patientiæ consensus in est.*

Era terminante que la *conocencia*, y las *posiciones*, ó sea la confesion jurada, podia ser pedida por el demandante al demandado, y *vice versa*, y hoy es terminante igualmente por la ley de Enjuiciamiento; como asimismo que el juramento que interviene no es decisorio; sino cuando así se espresa por el que pide la declaracion.

Segun la práctica de los tribunales, suele el que pide la confesion, formular verbalmente la peticion en el acto, en cuyo caso es indispensable que intervenga escribano: otras veces, y es lo comun y mas adecuado, la formúla por escrito, que presente en el acto, ó préviamente ha presentado, cerrado, al tribunal.

Está mandado que al que ha de declarar, no se le otorgue espera. Pero casos habria, en que apenas seria así justo, ni posible, como si se le pregunta por hechos ó convenciones de fecha muy anterior, como de veinte, treinta, ó mas años. De la racional peticion de espera, se dará traslado á la otra parte, que con su contestacion podrá allanar la dificultad. En otro caso el tribunal deberá aplicar la ley, negando la espera. Es casi seguro que el interpelado contestará, que por el trascurso del tiempo no recuerda los hechos; cuya respuesta no es la de negarse á declarar

(1) Ley 1.ª, tít. 13, Part. 3.ª

y para tenerle por confeso; sino que el pleito entra en vías de prueba.

Lo dicho hasta aquí se entiende, en cuanto á la confesion decisoria, respectivamente en sus casos de afirmacion, ó negacion, y de negativa á declarar: en los demás casos de confesion parcial, de que ya hemos hecho mencion, la aplicacion es relativa, segun las reglas de la crítica judicial, y para apreciada en definitiva: como si la parte hizo declaraciones referentes en otro juicio, si ha hecho concesiones en los escritos, al preparar la demanda etc., salvo si el abogado ó procurador no estaban especialmente autorizadas para tales declaraciones. No estándolo, la apreciacion de sus declaraciones es para efectuada en definitiva, sin que por ellas pueda tenerse por confesa á la parte, segun lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia (sentencias de 5 de Febrero de 1863: 20 de Junio de 1865 y 26 de Enero de 1866).

En suposicion de que la ley de Enjuiciamiento civil es aplicable solo en los casos del fuero comun; en los de fuero especial se estará á las disposiciones y jurisprudencia peculiar de los mismos. En varias de ellas es supletoria la legislacion comun, como lo era en los de comercio; y en otros aplicable ésta en un todo, como en los consejos provinciales, en lo contencioso-administrativo, y dicho se está, que en tales casos tiene aplicacion cuanto dejamos espuesto para el fuero comun, si bien hoy ha de tenerse presente la unificacion de fueros, por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868. En el Consejo de Estado ya hay diferencia: no puede pedirse confesion por conocencia, ni posiciones, ni en otra forma decisoria, á los empleados, por la óbvia razon de que la confesion decisoria ha de ser de hechos propios, con efectos personales; y aquí, en un caso, resultaria perjudicado un tercero, que es el Estado (arts. 122 y 141 del Reglamento de 30 de Diciembre de 1846).

CONFESION JUDICIAL (EN LO CRIMINAL). Si grande es la fuerza de la confesion judicial en lo civil, como medio probatorio, no puede ser menos en lo criminal; y antes mucho mayor, si cabe. Se concibe mas fácilmente que el hombre se decida á perjudicarse en sus intereses materiales, respondiendo á la verdad, á su conciencia, y á la santidad del juramento; que no en su libertad, en su vida tal vez, y hasta en su honra, cubriéndose, y á su familia, con el baldon de la infamia. Por eso, si en lo civil la confesion es una prueba acabada, que desde luego autoriza á fallar sin ulterior procedimiento, con mayoría de razon habria de serlo en lo criminal, pues revela en su caso, tanto mayor convencimiento, cuanto mayores intereses sacrifica en ella el confesante.

Y con todo, no es así en órden al procedimiento y sus efectos. No puede desde luego procederse á dictar sentencia definitiva, sin mas trámites; si bien la confesion, examinada bajo el criterio judicial mas rigoroso, será la base y fundamento jurídico de la sentencia. Y es que la confesion, como hecho humano, no es en ambos casos del todo idéntica en la naturaleza de las cosas. En lo civil, por su índole esencial, por los intereses sobre que versa, no cabe, ó apenas se concibe alucinamiento, terror, posible perturbacion del sentido: hay, en lo criminal, el influjo poderoso de móviles y circunstancias que no median en la confesion civil. De aquí la necesidad de depurarla por todos los medios del criterio racional y legal; y así vemos que lo han sancionado las leyes, y lo tiene adoptado la jurisprudencia general; llevando tal vez, y sin tal vez, unas y otras las cosas hasta la exajeracion, aunque huyendo, á la verdad, de insostenibles exajeraciones.

Tal fué la del tormento, para honra de la humanidad abolido, y de la propia verdad, que se buscaba, pues rara vez podia serlo, ni habia evidencia racional de que lo fuera, la que se arrancaba, aun con la vida, y siempre conturbando la razon, la libertad, el natural sentido, todas las facultades naturales; y eso, cuando la moral, y las propias leyes, en intereses de inferior órden, que la honra y que la vida, reconocian, en cuanto á la imputacion de los actos del hombre, á la humana responsabilidad, la justa escepcion de fuerza mayor, de fuerza ó miedo, que caen en varon constante.

Pero corriendo de un estremo hácia otro,

suprimióse despues la *confesion con cargos*, cuando no debió sino moderarse y precaverse su abuso, posible ó real: y se suprimió tambien la veneranda, suave, y eficaz garantía del juramento, como todo lo espresamos en sus artículos.

Aun así, sigue reconociéndose la esencial diferencia de la confesion en lo civil y en lo criminal, todo espresado por la diversidad de trámites, con que se depura el valor legal de una y otra.

Desde luego son, en gran parte, aplicables á la confesion en lo criminal, las reglas y calificaciones que dejamos consignadas para la civil; y si no son aplicables todas, ó no lo son con completa identidad, es porque aun se aumentan las precauciones y garantías en la confesion en lo criminal.

Es esta, la manifestacion ó reconocimiento, que hace el reo, hasta allí presunto, de su delincuencia, de su participacion y responsabilidad personal en el delito ó crimen de que se trata, como autor, como cómplice, ó como encubridor. Y como que siempre ha de ser espontánea, en el sentido de no arrancada, puede realizarse, ora presentándose el delincuente voluntariamente al juez, denunciando su propio hecho y declarándose reo, como no pocas veces sucede; ora al ser interrogado, meramente como testigo, cual sucede tambien á veces; en la indagatoria, cuando ya es considerado como reo; en cualquier declaracion de las que el juez puede pedir, en sumario como en el plenario; muy señaladamente á la conclusion de este, evacuadas ya las citas, y por tanto en el trámite á que correspondia la *confesion con cargos*, y en cualquier estado, en fin, del proceso; ya por acto, en cierto modo motivado, como un careo, un reconocimiento de piezas materiales, de cuerpos de delito, respondiendo á la acusacion ó al interrogatorio, etc.; ya por acto de todo punto espontáneo, lo cual puede practicar el encausado, en cualquier estado de la causa y en cualquier instancia.

Hecho así, por cualquiera de los medios indicados, el reo que la hace, se dice *confeso*: producida la conviccion jurídica de la delincuencia por otros medios legales, se dice *convicto*. A veces concurren los dos conceptos, y entonces el reo se dice *convicto* y *confeso*.

Ahora recorriendo los requisitos notados para la confesion civil, con la aplicacion conveniente á la criminal, diremos por su órden.

Major: que sea hecha por el mayor de edad; y si fuese menor, la intervencion necesaria de *curador*, aun cuando haya de nombrársele *ad litem* (ley 1.ª, tít. 13, y ley 3.ª, tít. 25, Partida 3.ª).

Con los requisitos mencionados, la confesion del menor es de todo punto válida, con tal de que esceda de los catorce años en los delitos de lujuria, y de diez y medio en los demás, pues que no llegando á esta edad, la confesion es ninguna (ley 4.ª, tit. 17, Partida 6.ª).

Sponte: que sea libre, y no arrancada por la fuerza ó por miedo de muerte, deshonra, ni por otra coaccion física ó moral; contestando á preguntas directas no capciosas, ni sujectivas; ni por dádiva, promesa, engaño ó cualquier impropio artificio. La confesion obtenida con alguno de dichos vicios, es en sí nula (1).

Ha de notarse bien la diferencia que hay entre la confesion *libre* y la *espontánea*. La confesion libre es la que el reo, llamado é interrogado, hace sin ninguna coaccion física ni moral: la confesion espontánea es la que hace el reo que se presenta voluntariamente y sin ser llamado, ó siéndolo confiesa antes de ser preguntado. Toda confesion espontánea es libre; pero no toda confesion libre es espontánea. Los autores opinaban que la espontaneidad atenúa la pena. Hoy esta declaracion, segun el Código penal, ofrece dificultad, pues no la enumera entre las circunstancias atenuantes. Pero es un acto plausible: la sociedad gana en que se estimule á la confesion, por cuyo medio no quedarán impunes delitos que de otro modo podrian quedarlo: el mismo Código penal tiene en cuenta la desistencia y denunciacion propia de hechos culpables. Por todo ello, y por la facultad que el Código deja á los jueces de hallar circuns-

(1) Leyes 4.ª y 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª: art. 8.º del Reglamento provisional, §. 2.º

tancias atenuantes, como agravantes, por asimilacion, segun su prudencia, parece autorizar el fallo equitativo.

Sciens: que se haga la confesion con certidumbre y no con yerro; de modo que, si el reo quisiera probar el error de su confesion, aunque ratificada ante juez competente, opinan los autores que se le ha de admitir prueba del error; y probado, no le perjudica la confesion. Tambien puede, si hubiese errado en alguna cosa, revocarla, interpretarla, declararla y escusarla, aun despues de la sentencia (1), alegándose el error, no solo por el reo, sino por cualquiera de sus consanguíneos, aun contra la voluntad del reo (2); pero el error debe probarse plenamente; juzgándose plenamente probado, no solo por testigos, sino por conjeturas, y teniéndose por verdadera la confesion en caso de duda (3).

Si la confesion se compusiese de varias partes, y algunas de ellas resultasen evidentemente falsas, se presume falsa en su totalidad; si en parte fuese dudosa y en parte verdadera, se presume toda verdadera (4): si es susceptible de dos interpretaciones, se ha de aceptar la interpretacion mas favorable al reo (5).

La confesion de sucesos, que no dependen de los hechos y de la voluntad del confesante, no le perjudican, aunque los reconozca: así es, que si uno confiesa que hirió á otro, y que éste murió de la herida; la confesion, en la primera parte, le perjudica, en la segunda no: porque el que el herido muriese, ó no, de la herida, es cosa que han de declarar los facultativos: y si estos afirman que murió de cualquier accidente estraño á las lesiones, la confesion es inválida en esta parte como errónea (6).

Contra se: que la confesion sea contra sí mismo; porque si la hiciese contra otro, no tiene valor alguno. Si confesase reconociendo su delito, incluyendo á algun cómplice, respecto á éste carece de fuerza legal directa; porque contra un reo «non podria ninguno de los otros sus compañeros, que se oviesse y acertado en facer aquel yerro, ser testigo (1),» así como tampoco sirve su declaracion para exculparle. A pesar de que el cómplice no podia acusar al cómplice, le era permitido y se le admitia en los delitos de lesa majestad, moneda falsa, sacrilegio, heregía, defraudacion de víveres, dilapidacion hecha á su prelado, simonía y robo (2). Pero si la indicacion no sirve como prueba directa, aprovecha grandemente para el procedimiento y para corroborar indicios y testimonios singulares. Véase **cómplice**.

Ubi jus fit: que la confesion se haga ante juez, y en juicio competente. Si se hiciera ante juez incompetente, por tal confesion no podria condenarse al reo, aunque se ratifique varias veces; bien sea el juez incompetente por razon de la persona, bien por razon de la cosa, ó del hecho justiciable. Sin embargo, no es, *ipso jure nulla*, como prueba, y tendrá la fuerza de confesion estrajudicial (3).

Si la confesion judicial fuese incidental en el proceso, en que se perseguia un crímen distinto, no es bastante para imponer la pena ordinaria, segun los comentadores; sino una pena aproximada y que ahora seria el mínimum de la marcada con arreglo al art. 45 de la ley provisional; puesto que la confesion, así prestada, aunque falta de la solemnidad que la ley exige, para concederle la fuerza de prueba plena; es bastante para llevar al ánimo del juez la conviccion de la criminalidad del reo confeso.

Preciso es todavía que la confesion, que se haga ante el juez competente, sea, no en particular; sino en audiencia, *sedente pro tribunali*, pues de otro modo no valdrá como prueba plena; ni tampoco, si componiéndose el tribunal de tres jueces, solo confesare ante

(1) Julius Clarus, quest. 55, n. 18. Ant. Gom., *Variar.*, tom. 3, cap. 1.°
(2) Farin., *De reo confess.*, cap. 9.°
(3) Mascard, *De probat. conclus.*, 350, n. 6.°
(4) Farinac citado, quest. 81, n. 22.
(5) Sent. del Trib. Supremo de 25 de Enero de 1854.
(6) Mascard citado, lib. 1.°, conclus. 388, cap. 1.°

(1) Ley 21, tít. 16, Part. 3.°
(2) Ley 21, tít. 16, Part. 3.°; y gl. 2.°, tít. 1.°, Part. 7.°, y alli Greg. Lop.
(3) Jul. Clar., quest. 55, n. 3: Mascard citado, lib. 1, conclus. 352.

Lorenzo Arrazola

uno ó dos, por que la persona moral que le ha de juzgar, la forman todos los tres, no el uno, ni los dos que no constituyen tribunal, salvo si uno es juez de instruccion.

Y tanta es la fuerza de la confesion, que revalida al proceso nulo y las faltas de forma que se hayan cometido en el sumario y la acusacion, de modo que por aquella puede ser condenado el reo, con tal de que la nulidad no sea por falta de jurisdiccion (1).

Certum: la confesion ha de versar sobre hecho determinado, porque, si preguntándole al reo, si habia muerto á Juan, confesase genéricamente que habia muerto á un hombre, esta confesion no le perjudicaria; aunque el juez debe inquirir y compelerle por los medios legales, á que especifique y determine el delito cometido. Ni tampoco basta, segun opinion de algunos autores, de la que disentimos, el que simplemente confiese un hecho principal: no basta que diga que *ha muerto á Juan*, es necesario que declare llanamente los hechos ó circunstancias accesorias (2) del caso, á no ser que resulten del proceso, pudiendo entenderse que el reo, como el tribunal, hacen supuesto de ellas y así las admiten.

Jus, nec natura repugnet: que no sea contra la naturaleza ó las leyes, como ya se dijo hablando de la confesion en lo civil. Tal seria, si reconociese haber matado á un hombre, fallecido antes que él naciera, ó haber cometido cualquier hierro de lujuria, siendo menor de catorce años, ú otro delito antes de los nueve; porque la ley (aunque en algun caso sea lo contrario), como por malicia precoz, supone incapacidad física en el primero, y moral en el segundo (3).

En todo evento es indispensable que haya *cuerpo de delito*, esto es, que conste la existencia del mismo de un modo indudable. La realidad y conocimiento del delito es la base del procedimiento. Sin que asi conste, á nadie puede juzgarse como reo. La confesion sirve para acreditar omnímodamente que hay delincuente, no para acreditar que haya delito: de modo que, si «alguno *conosciere* ante el juez que habia asesinado á un hombre que estuviese vivo, ó fuese cierto que hubiera muerto de enfermedad, tal confesion es nula, porque con yerro ó gran locura lo hizo» (1).

Mayor duda ofreceria el caso de que alguno se confesase haber muerto á un hombre que no apareciese vivo, ni muerto. Claro es que en este caso faltaria la certeza del delito, y habria lugar para sobreseer sin perjuicio, no para sentenciar condenando, sino hubiere otros datos (2). Todavia es reciente un caso, en que la Chancillería de Valladolid condenó á penas aflictivas, á varios reos, por suponer muerto por ellos á un hombre, con quien habian tenido pelea, y despues no aparecia, ni su cadáver. Ya llevaban muchos años de presidio los sentenciados, cuando en 1849, siendo Ministro de Grecia y Justicia uno de los escritores de la Enciclopedia, se le presentó el supuesto asesinado, regresando del estranjero. No hay que decir que los sentenciados fueron inmediatamente indultados; pero el caso, singular, no comun en la práctica, quedó evidenciado.

Consultando legalmente la existencia o cuerpo del delito, las leyes reputan la confesion, exenta de todo vicio, plena prueba, y autorizan que por ella se condene al reo. «El juez, ante quien se confiese, dé por la »confesion *juicio afinado*, si la conoscencia »fuese fecha en juicio, en pleito criminal, en »qual manera quier» (ley 2.ª, tít. 13, Partida 3.ª: item ley 12, tit. 14, id). Lo que ha de entenderse con las restricciones que dejamos notadas al hablar de la confesion en lo civil.

Algunos autores son de opinion, «que no se »tiene por prueba completa la confesion judi»cial del acusado, porque ha de constar el »hecho del delito y ha de concurrir alguna »semiplena probanza contra él... no tenien-

(1) Gom. variar. tom. 3, cap. 12.—Farin. citado, quest. 81, cap. 2.°
(2) Mittermaier, *De la prueb. en mat. crimin.*, cap. 33.
(3) Ley 4.ª, tit. 19, Part. 6.: Art. 8.°, del Código penal.

(1) Ley 5.ª, tít. 13, Part. 3.ª
(2) Gulier. *Pract. crim.*, part. 1.ª, cap. 7, §. 18. Véase aun á Mittermaier, *De la prueba en lo criminal*.

»do la confesion espresa fuerza... sino en »cuanto vá apoyada en otras pruebas... por- »que no debe ser condenado el reo confeso; »sino el convicto.» Ya hemos dicho que, si bien la confesion, sobre todo espontánea, puede acreditar á la vez el delito, y al delincuente, por regla general es solo lo segundo. El caso es, sin embargo, de criterio judicial, apreciando las circunstancias de la confesion y resultados del proceso.

No hay que decir que la confesion menos plena, la parcial, la que adolece de algun defecto legal, la estrajudicial, no ha de equipararse á la prueba plena, ni podria ser; pero, aun cuando espresen las leyes, que no aprovecha, que no es eficaz, etc., segun ya dejamos indicado, para alguno de los casos prácticos, puede aprovechar para inquirir, aun respecto de un tercero, y tambien alguna vez como presuncion, como dato acumulativo á otros datos, indicios, y presunciones.

El encausado puede ser eclesiástico: y aun cuando antiguamente no podia recibírsele la confesion por los jueces seculares, sino con intervencion del juez eclesiástico (1), despues se declaró innecesaria, desde el momento en que quedaban desaforados en los delitos atroces (2), y hoy mas por la unificacion de fueros.

En lo eclesiástico no puede ser condenado el que lo sea, por confesion hecha ante un juez civil (cánon *Etsi clerici*, *De judiciis*).

Si la procesada era mujer casada, podia recibírsele la confesion, sin licencia ni intervencion de su marido; aunque en lo civil necesitase la una y la otra. La razon es óbvia: en los negocios civiles, el interés es particular, los perjuicios que pueden sobrevenir, afectan al marido; mientras en los delitos, el interés es público, y la responsabilidad personalísima de la mujer procesada.

Por el sistema de la ENCICLOPEDIA, el complemento de la importante materia de confesion ha de conocerse en los diversos artículos conexos, como **PROCEDIMIENTO CRIMINAL**: **PRUEBA**.

CONFESION SACRAMENTAL. Es la que, para fines espirituales, se hace de las propias culpas, ante sacerdote competentemente autorizado para absolver de ellas: y sabido es, que la confesion en este punto es uno de los Sacramentos de la Iglesia católica.

En los primeros siglos, era pública y secreta. Aquella, por inconvenientes, que pueden comprenderse, resfriada la caridad primitiva, cayó en desuso; aun cuando no se halle prohibida por la Iglesia, y al revés, segun declaracion del Concilio de Trento; quedando en uso y obligacion, la confesion secreta. (Concilio de Trento, sesion 14, cap. 5.° *De confessione*).

No es propio del objeto de la ENCICLOPEDIA el descender á los multiplicados pormenores canónicos de la materia; pero sí lo haremos en este artículo, y en el de confesor y análogos, respecto de aquellos, que algunas veces dan lugar á embarazosas y delicadas cuestiones de disciplina, de derecho civil y canónico, y á conflictos entre ambas potestades.

Uno de ellos, es el de la confesion *anual, preceptiva y obligatoria*, en cuanto á sus efectos *ad extra*. Este precepto constituye, hace siglos, como es sabido, uno de los mandamientos de la Iglesia. El Concilio de Letran, lo impuso á todos los fieles adultos, por lo menos una vez en el año. *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata, saltem semel in anno, fideliter confiteatur.*

El Concilio añadia, que la confesion habia de ser, *proprio sacerdote*, lo cual se interpretó por el propio párroco; pero luego la disciplina, lo entendió de cualquier sacerdote aprobado.

Añadia el Concilio, por último, y es el caso de posible conflicto, que el que en vida y sana salud no cumplia con el precepto, fuese excomulgado; y si *in articulo mortis, fuere privado de sepultura eclesiástica....: alioquin et vivens ab ingressu ecclesiæ arceatur; moriens, christianâ careat sepultura*» (Ses. 13, cap. 21: *Omnis, de pœnit et remiss.*).

Como se ve, la excomunion impuesta no es

(1) Reales órds. de 19 Nov. de 1799 y 10 de Agosto de 1815; circul. en 13 de Set.

(2) Real Dec. de 17 de Octub. de 1835.

latæ, sino *ferendæ sententiæ*, y por lo tanto, el párroco no puede impedir por sí al feligrés resistente la entrada en la Iglesia, ni privarle en su caso de sepultura eclesiástica, pues no tiene facultad propia de pronunciar censuras; sino que ha de dar cuenta al obispo y esperar el resultado.

Sobre privacion de sepultura eclesiástica, el Tribunal Supremo de Justicia ha consultado en varias ocasiones, que el ordinario, en el caso del Concilio, estaba en su derecho en negarla, y así lo estimó el gobierno, resolviendo á queja de parte.

El Concilio de Trento, aceptó y reprodujo, como hemos dicho, la disposicion preceptiva y penal del de Letran (sesion 14, cap. 5.°, citados), y además declaró y ordenó en el cánon 8.° de dicha sesion; «*Si quis dixerit... ad eam* (á la confesion secreta) *non teneri omnes et singulos utriusque sèxus Christi fideles, juxta magni Concilii Lateranensis constitutionem, semel in anno... anathema sit.*» Véase **CONFESION: PENITENCIA.**

CONFESO. El que, en juicio criminal especialmente, confiesa, esto es, manifiesta, reconoce ó declara su culpabilidad: dícese tambien en juicio civil del que reconoce ó confiesa la obligacion de que se trata. Véanse los dos artículos anteriores.

CONFESOR. En la mística, el que manifiesta, ostenta y acredita la fé religiosa que profesa.

En lo canónico, y en el órden de la jurisdiccion espiritual, confesor, no es el que confiesa de sí, sino que, invirtiendo la razon etimológica, es el que recibe sacramentalmente la confesion de otro. Y es, en tal caso, el sacerdote aprobado y competentemente autorizado para oir, como ministro del Sacramento de la penitencia, la confesion privada de los fieles y absolver de los pecados que en ella manifiesten.

De este modo se vé, que el carácter de ministro del Sacramento de la penitencia, se limita solo á los varones, como el Sacramento del órden.

La jurisdiccion espiritual es inherente, en este caso, al órden de presbítero; pero por razones óbvias y de incontestable conveniencia, y aunque diferido canónicamente al presbiterado, hasta la edad madura de 25 años; la Iglesia no autoriza el uso de esa jurisdiccion, si no precediendo el debido exámen, y *aprobacion* por el obispo, espidiéndose por éste formal atestado, que en la práctica se llama *licencias de confesar*; y aun entonces, con diferencia de confesion de hombres y de mujeres; difiriéndose esta mas ó menos tiempo, por lo comun.

Las licencias son espedidas por el propio diocesano, y en ella se espresa la estension ó restriccion de las mismas. Su mayor amplitud local, será á la misma diócesis. Pueden, y suelen darse para otras; pero en este caso han de presentarse y ser autorizado su uso, por el diocesano respectivo.

Una de las restricciones de las licencias, es la de pecados, reservados á los obispos y aun al Papa; salvo *in articulo mortis*, en que todo sacerdote tiene facultades, ora como propias del órden, ora como delegadas; de todo lo cual, dan razon los cánones, las sinodales de cada diócesis, y á veces las mismas *licencias*.

A la confesion sacramental es inherente el *sigilo inviolable*. Sin él no seria practicable la confesion; y así la Iglesia lo ha impuesto y encarecido siempre, bajo severísimas penas: punto en el cual, concurren ambos derechos, y mientras el bien de la sociedad pareceria á veces exigir revelaciones en casos supremos, ó de primera gravedad, la razon, el buen sentido, la Iglesia, la sociedad, han concurrido á hacer en todo trance y de todos modos, inviolable el sigilo. *Sacerdos ante omnia caveat ne de his, qui ei confitentur peccata, aliis recitet: non propinquis, non extrancis, neque, quod absit, pro aliquo scandalo. Nan si hoc fecerit, deponatur, et omnibus diebus vitæ suæ, ignoniniosus peregrinando pergat.* (4. *dist.* 21, *ques.* 2, *art.* 1.°: *c. sacerdos, de pœnit. dist.* 6.

Y todavía el Concilio de Letran: *Caveat autem* (el confesor) *omnino, ne verbo, aut signo, alio quobis modo, aliquatenus prodat peccatorem: et si prudentiori consilio indigüerit, illud absque ulla expresione personæ cauté requirat; quoniam qui peccatum, in*

pœnitentiali judicio delectum, præsumpserit revelare, non solum á sacerdotali officio deponendum, decernimus. *verum etiam ad agendam pœnitentiam in arctum monasterium detrudendum.* (Cap. Omnis utriumque sexus.)

Las leyes de Partida, acogen y corroboran las disposiciones canónicas. «Descubriendo... la confesion, que dicen al clérigo... éste á tal face muchos males é gran les. Lo uno que es traidor á Dios, é desobediente á Santa Eglesia, é lo al que es á la vez á un cristiano... é dales (á los hombres) ejemplo de mal... tollendo que non sirvan á Dios, recelándose de se confesar... Onde cualquier clérigo, que descobriese confesion... por palabra, nin por señal, nin por otra manera ninguna, debe ser depuesto por ende, é encerrado en algun monesterio, onde faga penitencia por toda su vida» (ley 35, tít. 4.°, Part. 1.ª).

Con la misma pena castiga la ley al confesor, que teniendo que pedir consejo sobre pecados árduos, que le han confesado, descubriese al penitente, aun indirectamente; y lo que es mas, las leyes de Partida mandaban castigar aun al lego, que habiendo oido la confesion, por circunstancias, la descubriese (ley 36, id. id.).

Léese que en algun caso, y en alguna Audiencia de España, por revelacion del confesor, cuyo hermano habia sido asesinado, fué el reo condenado á muerte; cuya sentencia, sin embargo, no se ejecutó, por la enérgica reclamacion y protesta del insigne prelado de la diócesis, Santo Tomás de Villanueva. Hecho singular, por cierto: pero por lo demás, no hay que recelar que los tribunales pregunten á un confesor, con amenazas, ni sin ella, pues sobre el escándalo, la revelacion no haria prueba, como dicho de un solo testigo de oidas. Si hubiere otros indicios, ni aun con ellos deberia acumularse la revelacion, sino juzgar solamente por el valor de los mismos. Pero, si se diese el caso, el confesor debe negar absolutamente, ó manifestar, hasta con juramento, en opinion de autores de la mas relevante autoridad, que de nada se acuerda, aun habiendo por ello de perder la vida; opinion corroborada asimismo por nuestras leyes. «E aun mas la encarecieron los Santos Padres, que dijeron que si mandasen á algun clérigo que dijese, en virtud de obediencia, lo que sabia de confesion de alguno, que lo non debe descobrir por eso, nin por otra premia ninguna... ante debe decir todavía que lo non sabe, é dirá verdad; ca él non lo sabe, teniendo logar de ome; mas de Dios: é si por tal ventura lo matasen... seria mártir por ende... (Dicha ley 35, id. id.)

No admitimos la opinion de algunos autores, que en esto contradicen aun á Santo Tomás de Aquino, en cuanto éste reprueba la revelacion, *etiam de his, quæ periculum Regis aut reipublicæ tangunt*; si bien no se opone á lo dicho, que en casos supremos ó gravísimos, como los citados, puede y debe el confesor, prevenir el mal, por insinuaciones y prevenciones indirectas, y de humana prudencia, con abstraccion absoluta de la confesion y de la persona del confesado.

No tiene éste igual prohibicion para revelar las solicitaciones del confesor, ó si en otro sentido lo ha inducido al mal; si bien su dicho será testimonio únicamente de un testigo de oidas.

En este punto, y señaladamente sobre solicitaciones, son conocidas las disposiciones canónicas, como esponemos en su artículo; y son notables entre ellas, en el caso, las bulas de Pío IV, Gregorio XV, Clemente VIII, Paulo V, y Alejandro VII.

No puede, en fin, el confesor revelar, sin hacerse digno de castigo, ni aun el haber negado á un confesado la absolucion.

No hay que decir que en estos casos el conocimiento y el castigo contra el confesor, que prevarica, corresponde á la jurisdiccion eclesiástica, pues el delito es eclesiástico, y no de la jurisdiccion *atribuida*, como los delitos *atroces* de eclesiásticos, de que pueden conocer los tribunales seculares, conforme al Real decreto de 1835, y hoy á la unificacion de fueros.

No parece dudoso, en fin, que el confesado, que resulte injuriado ó calumniado por la revelacion, pueda vindicar su honra, como otras personas que, envueltas con él, se ha-

llen en el caso, querellándose, segun este, de injuria, ó de calumnia. ¿A qué medios de prueba puede descender el prevaricante? Ni ¿en qué principios de justicia estaria fundado, que un confesor, sobre prevaricar en su sagrado cargo, pudiera destruir impunemente la honra de los particulares y la paz de las familias?

Aun mas espedita seria la accion contra un lego, que usurpando criminalmente funciones de confesor, añadiese á este delito el damnificar con revelaciones injuriosas ó calumniosas.

CONFESOR DE MONJAS. El sacerdote, especialmente nombrado, para administrarles el Sacramento de la Penitencia. Para ello debe obtener nombramiento del obispo ó del superior de la órden, cuando la comunidad sea de jurisdiccion exenta; pero en todo caso es preciso la aprobacion del ordinario, segun disposicion de Benedicto XIII, confirmada por otras posteriores, entre ellas un decreto, fecha 10 de Marzo de 1750, de la sagrada Penitenciaría.

El Concilio de Trento (ses. XXV, cap. 10), dispone que los obispos y superiores de conventos de monjas, pongan sumo esmero, en que se las advierta y exhorte en sus constituciones, á que confiesen, á lo menos una vez cada mes; y que dos ó tres veces al año les ofrezcan un confesor extrordinario «que debe oirlas á todas de confesion.»

Los confesores de monjas, cuyos conventos estén gobernados por superiores regulares, no deben ser examinados por el obispo; mas puede este dar, como á los monasterios exentos, un confesor, que le parezca apropósito, bien sea de cualquiera de las órdenes regulares, ó bien pertenezca al clero secular. Sobre este estremo dispusieron Inocencio XIII y Benedicto XIII, que solo una vez al año fuese nombrado confesor estraordinario un clérigo ó sacerdote, perteneciente á cualquiera órden regular, distinta de la de las monjas. Benedicto XIV confirmó y generalizó esta disposicion. Uno de los anotadores del Concilio de Trento, observa que, siendo esta una materia favorable, todas las monjas tienen facultad para confesar por estraordinario.

El mismo Benedicto XIV, en su bula *Pastoralis*, de 5 de Agosto de 1748, mandó que se presenten las monjas al confesor estraordinario, aunque no quieran confesar con él; que si alguna se niega á verificarlo, aun con el confesor ordinario, se le envíe otro *pro certis vicibus*, y que se le dé uno particular á la que lo pida *in articulo mortis*, ó en el caso de enfermedad grave. El confesor estraordinario, una vez cumplida su mision, debe abstenerse de penetrar en los cláustros y de mantener relaciones con las monjas. Mientras desempeña su cometido, no puede el confesor ordinario oirlas en confesion, ni poner obstáculos para que aquel lo haga.

El nombramiento de toda clase de confesores, ordinarios ó estraordinarios, ha de ser aprobado por el diocesano. La negligencia del prelado regular, en nombrar confesores estraordinarios, debe ser suplida por el celo del obispo; y la negligencia de este por el cardenal mayor penitenciario. Corresponde al obispo, por su propia autoridad en los conventos sujetos á su jurisdiccion, y por autoridad delegada, en los que lo están á la Sede Apostólica, el conceder licencias para penetrar en la clausura de monjas (1). Pueden concederlas tambien el vicario general, teniendo especial mandato para ello, y el capitular, como delegado del capítulo, porque este sucede asimismo al obispo en la jurisdiccion delegada, cuando esta es perpétua y va inherente al cargo episcopal. La Sagrada congregacion del Concilio declaró en 17 de Mayo de 1704, que no le es lícito al confesor de monjas firmar licencias para entrar en los conventos, escepto en favor de las personas que para ello estén autorizadas por el obispo; y que el confesor puede celebrar el sacrificio en la capilla de la enfermería del convento.

Segun decretos de Sixto V y Urbano VIII, y declaracion de 23 de Noviembre de 1592, de la Congregacion de obispos y regulares, los confesores de monjas no necesitan licencia del ordinario para hablar con sus confesadas (2). Como está concedido á los superio-

(1) Barbosa, *de offic. et potest. Episcop.*, p. III, *alleg.* 102, n. 38.

(2) Ferraris, *Bibliotheca*, *Moniales*, art. IV, núms. 22, 23 y 60.

res regulares y los visitadores de conventos, mientras está prohibido, bajo ciertas penas, á toda otra persona, escepto los dias y en los casos y forma que determinan los estatutos de las órdenes respectivas. Véase todavía CAPELLAN DE MONJAS.

CONFESORIA (ACCION). En su lugar queda hecha indicacion de la accion, á que se dá el nombre de confesoria (véase ACCION CONFESORIA); pero allí solo se hizo mencion de ella, con el propósito de distinguirla de las demás acciones, cuando se hacia la enumeracion general de ellas, y así solo se señalaron sus mas notables caractéres. Este es el lugar oportuno para esponer lo demás que conduce á su perfecta inteligencia.

Las servidumbres, bien sean reales ó prediales; bien sean personales, son siempre derechos en la cosa, *jus in re*. Como desmembracion, ó especie de co-participacion en la propiedad, son protegidas por las leyes del mismo modo que la propiedad misma, y producen acciones *reales*, porque pueden reclamarlas judicialmente aquellos que no encuentran expedito el uso ó aprovechamiento en que consisten. No tienen, como los dueños de las fincas sobre que se hallan establecidas, la *reivindicacion*, que es la accion real por escelencia; pero sí otras acciones de igual eficacia, cuyo objeto es que no sea ilusorio el derecho sobre finca ajena, ya sea en beneficio de prédios rústicos ó urbanos, ya en provecho inmediato y esclusivo de aquel ó de aquellos, á cuyo favor está constituido, y tambien que el dueño de una finca, no gravada, pueda defender su libertad contra el que sin derecho la supusiere afecta á una servidumbre.

Mas cuando se trata del dominio, el que lo reivindica, se presenta pidiendo siempre la cosa que le corresponde; alega que es suya, y que aquel, contra quien entabla la demanda, la posee ó detenta sin derecho. Asegura, pues, un hecho positivo, su dominio: no le basta decir que el demandado no tiene derecho para retener la cosa que posee, por que de esto no se inferiria que era del demandante, pues que muy bien podria corresponder á un tercero. No sucede lo mismo respecto á las acciones, que nacen de las servidumbres: estas no tienen una sola fórmula, como la reivindicacion: tienen dos diferentes; una para pedir la servidumbre constituida á nuestro favor, personal ó en beneficio de nuestras fincas, la cual se llama comunmente *confesoria* ó *afirmativa*, en oposicion á otra que se llama *negatoria*, ó *negativa*, en que se niega que una finca tenga impuesta una servidumbre, lo que en sí lleva implícita la afirmacion de que es libre. De estas acciones negatorias dice el Emperador Justiniano: *Quod genus actionisin controversiis rerun corporalium proditum non est; nam in his, is agit, qui non possidet: ei vero qui possidet, non est actio prodita, per quam neget rem actoris esse* (§. 2.°, tít. 6.°, libro 4.° de las Instituciones). Se ve, pues, que, á diferencia de la reivindicacion, en que solo puede pedir el que no posee, en las acciones que nacen de las servidumbre, de que en este lugar tratamos, puede pedir que se respete su derecho, tanto el que posee, como el que no posee.

La accion *confesoria* es la que deduce el que cree tener una servidumbre predial ó personal, constituida en finca agena, contra el que le impide su disfrute, con objeto de que le deje espedito el ejercicio de su derecho, le indemnice de los daños y perjuicios que le haya ocasionado, y aun para que afiance que no le turbará en lo sucesivo en el ejercicio de la facultad que, atendida la clase de la servidumbre, le corresponda. No está en la accion *confesoria* tan circunscrita la facultad del juez, como en otras: la diferente clase de servidumbres impide que á todas se les pueda aplicar siempre la misma regla. No hay otro recurso que dejar algo al prudente arbitrio de los tribunales, de modo que, atendida la índole particular de cada servidumbre, adopten los medios mas eficaces para asegurar su cumplimiento.

No son solo los dueños de predios dominantes, ó los que sobre fincas agenas tienen á su favor constituidas servidumbres personales, los que pueden ejercitar la accion confesoria; sino además cuantos, teniendo un dere-

cho real sobre cosa inmueble, están interesados directamente en que la servidumbre sea respetada. En este caso se hallan, por ejemplo, los que tienen los derechos de hipoteca, de enfiteusis, ó de superficie: á todos les alcanza el espíritu que domina en las doctrinas que dejamos espuestas.

Cuando se entabla la accion *confesoria*, la obligacion de probar los hechos, que le sirven de fundamento, es del que la deduce. Además de que esta es una regla general de derecho, de que solo se exceptúan algunos casos especiales, señalados en las leyes, hay aquí la consideracion jurídica de que la propiedad se supone libre, mientras no se demuestre que está sujeta á algun gravámen.

Las doctrinas, que dejamos espuestas, respecto á las servidumbres, están tomadas del derecho romano y enlazadas con su sistema formulario: entre nosotros, donde solo se atiende al derecho que hay para deducir las acciones y que tenemos muy simplificadas las fórmulas, seria inútil descender á algunos pormenores formularios, que lejos de aclarar, introdujeran confusion en materia tan sencilla. Queda espuesto todo lo que consideramos aplicable en la práctica respecto á la accion confesoria, denominacion que no está escrita en nuestras leyes; pero que no desechamos porque, facilitando la inteligencia de las leyes, nos evita la necesidad de acudir á circunloquios, y está usada frecuentemente por nuestros jurisconsultos.

CONFIANZA. Del verbo *fido* y la preposicion *cum*; fiar unos en otros, fiar juntamente; y de ahí *fiducia*, traducida *confianza*. Es la seguridad anterior, que tenemos, no ya de no esperar mal; sino de haber de esperar bien, proteccion, favor, defensa respectivamente, de personas ó cosas. Sin esta seguridad interior, la sociedad humana seria imposible: seria un estado de guerra. Fundada la confianza respectivamente en motivos naturales, morales y sociales; en cosas y personas; en las cualidades y deberes de otros; y en nuestra propia conducta, es una garantía providencial y universal. En lo humano, se estiende á toda la sociedad, y abarca todos los órdenes: es á un tiempo en los asociados, derecho y deber: todo y todos, debe y deberán inspirar confianza: todos podemos tenerla y debemos merecerla. Por su universalidad, no se manda individual y preceptivamente; pero se encarga, se recomienda, se crean y encomian motivos y causas que la inspiran: es así ley de la sociedad y del universo. ¿Quién no confia en Dios, en sus padres, en sus amigos, en la ley y en la autoridad, en el comun sentido y en la sociedad ordenada; y en sus leyes providenciales de la moral, de la integridad, de la dignidad y del decoro?

Siendo hasta tal punto universal su necesidad, apenas puede evitarse el abuso de ella; que será por el contrario de lamentable frecuencia. Los legisladores, sin embargo, á causa de su índole universal, no han podido constituir un delito particular de su abuso. Por otra parte, apenas puede cometerse un delito, una transgresion, ó verificarse el abandono de un deber, sin que acompañe un abuso de confianza, en el sentido en que todos debemos y todo el órden social debe inspirarla. De aquí el considerar el abuso como una cualidad agravante de otra delincuencia. ¿Cómo de otro modo se comprenderia el bien meditado libro 1.° del Código penal? (Artículo 10).

Alguna vez, en el derecho, *confianza* se toma por el abuso de ella, con el fin de defraudar, cual puede verse en el tít. 9.°, lib. 10 de la Nov. *De los depósitos y confianzas*. Prohíbese el poner bienes y cualesquier intereses en poder ó cabeza de un tercero, por medio de *confianzas* ú otros medios, para defraudar á la Hacienda pública ó á las particulares. Trátase por tanto de contratos simulados, que justamente reprueba y castiga la ley.

Segun esta, los ministros ú oficiales de los tribunales de Hacienda, que lo hicieren, perderán lo así depositado, con el tres tanto; y los receptores, lo recibido y otro tanto.

Los demás empleados de Hacienda el dos tanto.

Los empleados en lo judicial ó gubernativo, lo depositado y otro tanto: y el ocultador incurrirá en mil ducados de multa.

Si el abuso tuviese lugar entre particulares, sobre la restitucion á sus legítimos dueños, los que depositan, incurrirán en multa de 500 ducados, y los que reciben, en cien mil maravedís, con todos los intereses, daños y perjuicios.

Si los bienes eran de enemigos de la Corona, la pena era de confiscacion, la cual no está ya en uso: si de particulares estranjeros, en razon de no poder ellos ponerlos en nuestros dominios, una y otra parte perderá la mitad de sus bienes.

Las penas hasta aquí espresadas, se habrán de imponer, sin perjuicio de otras impuestas por las leyes.

Los escribanos que autorizasen dichas confianzas, perderán el oficio, con cien mil maravedís de multa.

Los encausados, que se espontaneasen, antes que haya prueba semiplena, se eximirán de las penas: si espontáneamente hacen la revelacion, recibirán en premio la mitad de las multas; y lo propio, si el descubrimiento lo hiciese un tercero.

La ley quiere, en fin, que en estos casos, se admita prueba privilegiada (ley 2, tít. y lib. citados). Véase **ABUSO DE CONFIANZA: DELITOS Y FRAUDES CONTRA LA HACIENDA PUBLICA.**

CONFIDENCIA. Del mismo origen etimológico que confianza; pero de diversa significacion. La confianza puede ser solo un sentimiento; la confidencia es siempre un deber de parte del que la recibe. La confianza se ciñe mas al órden moral, y puede no salir de él; la confidencia además de eso, entra como deber y como medio en el órden político y en el administrativo; y todo el mundo sabe lo que son en la guerra, por ejemplo, en espediciones peligrosas, en conspiraciones y sediciones las *confidencias* y los *confidentes*. Las confidencias, pues, cuando son lícitas y morales, constituyen un deber en el que las recibe, y cuyo abuso, por tanto, hace responsable al confidente.

CONFIDENCIA BENEFICIAL. Un convenio simoniaco, en virtud del que, se colaciona, ó se resigna un beneficio eclesiástico, á condicion de que haya de percibir, en todo ó parte, los frutos, el colador ó resignante. Puede consistir el fraude, en haber de resignar, ó renunciar el beneficio, mas adelante, en el mismo colador ó resignante, ó en otra persona ó de otros modos diversos todavía. Todo lo que sea reservarse algunas ventajas el patrono ó el resignante, ó recibir el nombrado ó resignatario el beneficio, mediante algun gravámen, ó con alguna disminucion de sus legítimos emolumentos y ventajas, constituye *confidencia* reprobada. En lo antiguo no debió de ser conocido, ó por lo menos frecuente, este abuso, cuando no se menciona en el Cuerpo del derecho, no siendo genéricamente comprendido en la simonía. Despues se hizo tan frecuente, que un mismo Pontífice tuvo que multiplicar las bulas y sanciones de su prohibicion. Los jueces eclesiásticos, han de tener presentes, las de Pío IV, de 1564, y las de Pío V, de 1568 y 1569, muy señaladamente la constitucion *Intolerabilis*.

En un principio, se decian *confidenciarios* solo los que admitian la confidencia; despues aun los coladores ó resignantes.

CONFIESA. Palabra anticuada del foro. Equivalia á estar confeso el reo; pero en rebeldía, ó por no comparecencia. Así *caer en confesa, estar en confesa* etc., era dar al reo por confeso, cuando por su voluntad ó rebeldía así lo autorizaba el derecho. Hoy la teoría, á que la frase se refiere, no puede ni debe tener aplicacion en lo criminal. En lo civil, alguna vez, como en las posiciones, cuando el requerido se niega á contestar; pero en todo caso la frase será: *haberle por confeso*.

CONFINAMIENTO. De *confin*, coindencia del límite divisorio de dos provincias, regiones, Estados. Pero la etimología no nos espresa, ó dá á conocer la calidad ó naturaleza de la pena; y hay que buscar la verdad tomando esta pena como el Código penal la establece.

Antes de eso diremos que las penas, con locomocion de domicilio, como destierro, confinamiento, relegacion, deportacion, presidio, tienen entre sí algo de comun, como lo es desde luego el arrancar al penado de su do-

micilio, ó del lugar en que cometió el delito: coinciden tambien á veces, en algunos pormenores, sobre la ejecucion de la pena. De aquí el tomarse, así bien, unos por otros en las diversas legislaciones, y, por consecuencia, la falta de exactitud, ya al establecerlas, ya al mencionarlas, como todo lo demostraremos, fijando con precision la naturaleza de cada una de dichas penas, y la inexactitud en su enunciacion por las diversas legislaciones, en el artículo **DESTIERRO**.

Hé aquí, ahora, la naturaleza del confinamiento, segun el Código penal, ya reformado, de 1850. Desde luego era *corporis aflictiva*, bajo el doble concepto, ó doble especie, de *confinamiento mayor*, *confinamiento menor*, ocupando la primera de ellas el dozavo lugar, descendiendo desde la de *muerte* y el 19 la segunda (art. 24 del Código). En la escala de *graduacion de penas*, corresponde á la escala núm. 3, y ocupaba, el 5.° lugar, despues de *relegacion perpétua*, *estrañamiento perpétuo*, *relegacion temporal* y estrañamiento temporal, el confinamiento mayor, y el 6.° el confinamiento menor (id., artículo 79).

«Las penas de..... confinamiento mayor, duran de siete á doce años: Las de..... confinamiento menor...., de cuatro á seis años.» (§§. 1.° y 2.°, art. 26).

La pena de arresto mayor llevaba consigo las accesorias de inhabilitacion absoluta para cargos ó derechos políticos, y sujecion á la vigilancia de la autoridad, por todo el tiempo de la condena, y otro tanto mas, que empezará á contarse desde el cumplimiento de aquella (art. 57): y la de confinamiento menor, la de suspension de todo cargo ó derecho político, durante el tiempo de la condena (id., artículo 58).

El grado *mínimo* en la pena de confinamiento mayor es de 7 á 8 años: de 9 á 10 el grado *medio*, y de 11 á 12 el grado *máximo*. En la de confinamiento menor, respectivamente, de 4 años á 4 y 8 meses; de 4 años y 9 meses, á 5 años y 4 meses; y de 5 años y 5 meses á 6 años (art. 830, y véase aun el Real decreto de 21 de Setiembre de 1848).

Los sentenciados á confinamiento mayor serán conducidos á un pueblo, ó distrito, situado en las Baleares ó Canarias; ó á un punto aislado de la Península, en el cual permanecerian en plena libertad, bajo la vigilancia de la autoridad. Los que fueren útiles por su edad, salud y buena conducta, podian ser destinados por el Gobierno, al servicio militar, si eran solteros, y no tenian medios con qué subsistir (art. 107).

El sentenciado á confinamiento menor residirá precisamente en el punto que se le señalaba en la condena, del cual no podrá salir, durante esta, sin permiso del Gobierno, por justa causa. El lugar del confinamiento distaria, al menos, diez leguas del en que se hubiese cometido el delito, y del de la anterior residencia del sentenciado. El confinado estaria sujeto á la vigilancia de la autoridad (artículo 108).

Los sentenciados á confinamiento menor, que cometian otro delito ó falta, serian condenados en la pena señalada por la ley á la nueva falta ó delito, en su grado máximo; debiendo cumplir esta condena y la primitiva por el órden, que en la sentencia prefijan el tribunal, de conformidad con las reglas prescritas en el art. 76, para en el caso de imponerse varias penas á un mismo delincuente (art. 125).

La aplicacion de la pena de confinamiento es casuística, como las penas compuestas, en lo que ha de estarse á la combinacion de cada caso; especificada, ó determinada por el Código, para los mismos. Así las autoridades, que no fueren de nombramiento directo del Gobierno, que no hubieren resistido la rebelion ó sedicion, por todos los medios que estuvieren á su alcance, sufririan la pena de confinamiento mayor é inhabilitacion perpétua absoluta (art. 186); y las de confinamiento menor, los meros ejecutores de la sedicion (artículo 178); los eclesiásticos que en el ejercicio de su ministerio provocasen la perpetracion del delito de desacato, y de desórdenes públicos, si se hubiese seguido el efecto (art. 202), y los que faltando á su palabra de desistencia en materia de duelo, provocasen de nuevo á su adversario (artículo 349).

El nuevo Código penal de 1870 ha introducido notables novedades en este, como en otros puntos, como esplicamos en cada uno. En el presente ha suprimido la sujecion á la vigilancia de la autoridad (art. 20 y 53): suprime el confinamiento menor, quedando solo el mayor, con la duracion de 6 años y un dia á 12 años (art. 26 y 29). Últimamente, «la duracion de las penas de estrañamiento y destierro no empezará á contarse sino desde el dia en que el reo hubiere empezado á cumplir la condena.»

Y todavía, como de aplicacion general, que «cuando el reo entablare recurso de casacion, y fuere desechado, no se le abonará en la pena el tiempo trascurrido desde la sentencia de que recurrió hasta la sentencia que desechó el recurso» (art. 31).

CONFIRMACION. Version de *confirmatio*, y esta voz, de la preposicion *cum* y el adjetivo *firmis*, afirmarse una cosa con otra.

Así en el órden convencional, un dicho, un hecho, un pacto, promesa, etc., que ya constan, se confirman, esto es, se corroboran ó afirman mas, reiterándolos, ó por otros medios de prueba al mismo propósito.

Así tambien en lo judicial, de uno y otro foro, una providencia ó sentencia, dictada por el tribunal inferior, se confirma por otra conforme del superior, que por tanto se dice *confirmatoria*.

En todo caso la confirmacion, dá mas autoridad y fuerza; pero no mas verdad; sino que acepta lo que viene, y es lo que confirma: de suerte que si lo confirmado era falso, falso se queda, en la fuerza y verdad natural de las cosas. *Qui confirmat, nihil dat, sed datum tantum significat.*

En lo judicial, sin embargo, hay que tener muy presente que, aun cuando la sentencia del inferior encierre una falsedad; y una falsedad por tanto la confirmatoria, si esta hace sentencia *firme*, si produce cosa juzgada, *res judicata pro veritate habetur*, salvo hoy el recurso de casacion, admitido en lo criminal.

Con eso y todo, en ese caso y en cualquier otro de sentencia firme, aunque no sea confirmatoria, hay verdad ciertamente; pero no verdad natural, sino verdad de derecho, verdad de autoridad: por eso, juzgando con exactitud, no se dice que la cosa sentenciada y ejecutoriada ha pasado á la esfera de verdad natural y absoluta; sino que *ha pasado en autoridad de cosa juzgada*, si bien en ese sentido, *res judicata pro veritate habetur*.

Pero de aquí se desprende una consecuencia irresistible, y al parecer perturbatoria; y es que, juzgando por leyes de humana prudencia, como por principios de suprema justicia, si con efecto, al través de las formas jurídicas, puede alguna vez triunfar el error; la verdad moral, sobre la verdad real; alguna vez tambien, deberá establecerse *revision* de la cosa juzgada. Y cabalmente sucede así en todas las legislaciones, porque así, aunque con exquisito tacto y miramiento, es preciso que suceda; que no ha sido la certeza matemática la que ha fijado número á las sentencias, buscando la verdad; sino la conveniencia y la necesidad moral, de que la contencion, los juicios, tengan un término. Véase COSA JUZGADA: SENTENCIA.

Por la misma razon, es preciso en lo convencional, que el que reitera, ratifica y por tanto confirma un error, pueda volver sobre él. Si ratificó ó confirmó, por ejemplo, un adeudo no cierto, y en su consecuencia realizó un pago indebido, es preciso que pueda invocar y hacer triunfar la justicia: y el derecho, en efecto, le dará accion y fórmula; le dará la *condiccio indebiti*.

CONFIRMACION (EN LO CANÓNICO). Uno de las Sacramentos de la Iglesia. Despues del reducido periodo del bautismo por *inmersion*, y por *aspersion*, se conferia al mismo tiempo que el bautismo individual por *ablucion*, y de aquí que se administraba á los párvulos. Despues prevaleció la opinion, de que no se confiriese sino á los que hubiesen cumplido siete años.

Como el bautizante, en bautismo solemne, ungia y unge en la frente al bautizado con óleo sagrado, en ausencia del obispo (*Can Pervenit, dist. 5 de consecr.*), prevaleció la idea de que los presbíteros, además de los obispos, eran tambien ministros de la confir-

Lorenzo Arrazola

macion. Hoy es de fé, que el ministro *ordinario* es el obispo. «*Si quis dixesit santæ confirmationis ordinarium ministrum, non ese solum episcopum; sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit*» (Concilio de Trento, sess. 7, cán. 3). Y ya antes el cánon *Manus*, dist. 5 citado, si bien calificado de apócrifo por algunos.

Benedicto XIV (*De synodo diœces.* lib. 7.°, cap. 7 y 8) adoptó por último la opinion, y así prevalece, de que el presbítero puede ser ministro estraordinario de la confirmacion; pero por delegacion del obispo, y con óleo consagrado por éste. Es doctrina constante tambien, que el Papa puede hacer esta delegacion á los abades, consintiendo su ejercicio el diocesano, y con óleo por él consagrado; salvo si el abad es *nullius*, y por tanto mitrado, en cuyo caso no tiene otro superior en ese género que el Papa.

Las leyes de Partida establecen, asimismo, que solo el obispo es el ministro ordinario de la confirmacion, y que el que se confirma dos veces, sufra la pena, que el que reitera el bautismo (ley 11, tít. 4.°, Partida 1.ª).

En la confirmacion, no hay sino padrino para los varones y madrina para las hembras, si bien en algunos Estados cristianos, como la Francia, no los hay á veces.

Segun algunos concilios particulares, los padrinos no pueden ser los del bautismo.

Les está prohibido dar cosa alguna al confirmado, segun los concilios de Aix, de Narbona, y 11 de Milan, *ne ocasionem prœveat iterandi hoc sacramentum*.

Es notable, que las declaraciones citadas del concilio de Trento y de Benedicto XIV, vinieran á confirmar las del cánon 38 del concilio de Elvira y 7 del concilio hispalense 2.°

Segun la disciplina de España, está autorizado el cambiar en la confirmacion el nombre del bautismo, motivo por el que, para los intereses de familia, se lleva y debe llevar cuidadosamente, puntual registro de confirmados, como de bautizados.

Sobre el parentesco que resulta de la confirmacion, véase AFINIDAD.

CONFISCACION. Version de *confiscatio*. En el artículo **FISCO**, esplicamos la etimología y vicisitudes de la locucion. En los últimos tiempos, recientes todavia, era la aplicacion, en pena, á la cámara del Rey, por último á la real Hacienda, de todos los bienes del sentenciado, por delito grave y notable, como el de *lesa majestad*.

Como pena, rayaba en el estremo de la injusticia, y en vano se han escogitado razones para justificarlo. La malicia las solia buscar en la codicia del Soberano, que así aumentaba su patrimonio particular, que es lo que originariamente se llamaba *fisco*, en contraposicion á *erario*, que espresaba el tesoro ó patrimonio del Estado: la jurisprudencia, atendiendo á facilitar esplicaciones decorosas, lo referia al deseo y mira jurídica de hacer mas efectiva la pena, pues retraeria mas al hombre, en el camino ya de la delincuencia, el perder á toda su familia, que el perderse solo. La esperiencia demostró que la teoría fallaba, vista la frecuencia sucesiva de las confiscaciones. Una cosa no pudo ocurrir á los legisladores, y es que ese escándalo social iria en aumento, pues que no solo vendrian tiempos, en que se relajarian del modo mas imponente, y eso aun en pueblos civilizados, las afecciones y lazos de familia; sino que aun esta seria declarada, y eso á nombre de la civilizacion, crímen de lesa libertad, de lesa humanidad, esterminable por tanto, al par que la propiedad y la misma sociedad humana.

Como quiera que sea y sin presentir, como posibles siquiera, los formidables delirios, que aun aspiran á revestir el carácter de teorías, ya desde los tiempos mas antíguos el buen sentido habia hecho prevalecer la máxima de que *era desgraciado el país, en que era afortunado el fisco*. Y si bien en muchos siglos el criterio de la codificacion no fué tal, que la eliminase, como pena, de los fastos jurídicos; la jurisprudencia racional la fué desautorizando, y el criterio racional fijando el momento de su estincion, cuando los pueblos civilizados pensasen con mas recto sentido en su codificacion.

Así debia suceder, y así sucedió, llegado

ese momento. Empezó la moderna codificacion europea, que luego atravesó los mares, y en los nuevos códigos y en las nuevas Constituciones políticas, apareció, no ya suprimida; sino espresamente rechazada la confiscacion.

Así, nuestra Constitucion política de 1812, la prohibió expresamente, por su art. 304: la de 1837, por el 10: la de 1845, por el 10: y si bien la novísima de 1869 no hace mencion de ella, no tenia que hacerla: los códigos penales tenian ya, y tienen adelantado ese camino, estatuyendo el de 1848, como luego sus reformas, que no se impondrán otras penas, que las que los mismos establecen y para los delitos que espresan; y no mencionándose la confiscacion, es claro que queda abolida, así en el órden legislativo, como en el jurídico.

CONFISCACION (EN LO ECLESIASTICO). Hablamos de ello para decir que la Iglesia no tiene fisco, ni por tanto practica la confiscacion. De aquí el principio *Ecclesia, nec territorium, nec fiscum habet.*

Esto como sistema penal y teoría general. Ni correspondia otra cosa al carácter de mansedumbre, y á la justicia de la Iglesia. Lo que por último han rechazado las naciones cultas, y las ajustadas y bien entendidas teorías penales; no podia profesarlo la Iglesia, cuyos fines son otros, y otras las penas, que las de las legislaciones temporales.

Pero algunos cánones hablan de la confiscacion, y es menester hacer mencion de ellos. Son principalmente, el C. *Accusatoribus*, 3, quest. 5: C. *Vergentis*: y el C. *Excommunicavimus, de hæreticis*. Es de notar que se trata de los herejes, que han solido castigar las leyes canónicas y las civiles, y en todo caso, que la Iglesia no se ha aplicado á sí misma los bienes. Segun la primera de estas decretales, los bienes del hereje se confiscarian, aplicándolos al señor de la tierra. Otra de ellas dice terminantemente que, si el hereje fuere clérigo, se aplicarian sus bienes á la iglesia, ó iglesias, donde tenian sus beneficios: *Bona damnatorum, si sint laici, confiscenter; si vero clerici, applicentur ecclesiis, é quibus stipendiis receperunt.*

El cap. *Oportet*. de *Mandatis Principum*; desecha, como inadecuada é injusta la pena de confiscacion, é inculca otras de órden diverso: *Magis emendare clricorum personas, quam in eorum bona sevire, debere*: *non enim sunt res, quae delinquunt; sed res qui possident.*

En las actas de algunos concilios de la Península, como, por ejemplo, el de Tarragona, de 1233, se nota que, por su capítulo 6.°, fué en él aprobada la constitucion del Rey D. Jaime de Aragon, segun la que, el que voluntariamente acogiese á los herejes, perdiese *ipso facto* y para siempre, su tierra; y si consistiere en feudos, se aplicaran á su señor; « y si en alodios, se confiscaran, entregándonos su persona para castigarla, segun merezca » (*Coleccion de cánones de la Iglesia de España*, por Tejada, tom. 3, página 363). Pero se vé que aquí es el Rey el que confisca: el Concilio aprueba meramente, lo cual no es aplicarlo por sí. Podemos concluir que en la Iglesia no ha sido, ni es sistema, ni práctica el confiscar.

CONFLICTO DE AUTORIDADES. Dícese tambien conflicto de atribuciones, especialmente cuando versa entre autoridades, que no tienen un superior comun. Aun en ese caso, entre nosotros se dice mas bien *competencia*, y al debate contienda de competencia. Véanse estos artículos.

CONFLICTO (EN LO ECLESIASTICO). Alguna vez podrá tener aplicacion lo dicho en el artículo anterior; pero en general el conflicto en lo eclesiástico es de índole especial, y á veces anómala. Puede ocurrir entre dos sufragáneos de una misma metropolitana, ó sus provisores; en cuyo caso toca dirimir al metropolitano; si son de distinta metropolitana, á la Rota.

A la Rota tambien, si es entre dos metropolitanos.

Si es entre el eclesiástico y una autoridad secular administrativa, al ministro de Gracia y Justicia, que oye, segun el caso, al Tribunal Supremo de Justicia, ó al Consejo de Estado, ó entabla contienda con él otro ministerio.

Si fuere con la Rota, el recurso es al Nun-

cio, y en su caso á Roma, invocando la intervencion del ministerio de Gracia y Justicia, que á su vez recurrirá al de Estado para la gestion diplomática cerca de su Santidad.

Si es, en fin, con un juez ó tribunal civil, ó secular, suele revestir en carácter de competencia, y por tanto de *recurso de fuerza*. Véase este artículo.

CONFRONTACION: CONFRONTAR. Del sustantivo *frente*, parte principal de la cara, y la proposicion *cum*, trasformada en *con*: poner dos personas frente á frente; y en sentido figurado dos cosas, como dos escritos. El derecho tiene recibida con mucha propiedad y uso esta locucion; si bien, respecto de las personas, es menos usada que las de careo y carear, derivadas, no ya de una parte notable de la cara del hombre, sino de la cara toda. Véase por tanto **CAREO**, y allí los inconvenientes y ventajas de esta diligencia judicial, practicada en los juicios criminales, y la suma discrecion que requiere de parte del juez. Ordena y recomienda el derecho que la confesion y aun las declaraciones en los procesos criminales, las reciba el juez por sí, sin encomendarlas al escribano; pero, si no tal vez con mayoría de razon, con igual razon por lo menos, debe tenerse por encargado respecto de los careos; doblemente, porque, no como quiera son declaraciones, y tal vez confesiones, sino de primera importancia.

Dícese con mas frecuencia confrontacion la de documentos, ó piezas escritas de un proceso, en lo civil ó criminal; pero como tambien con mas frecuencia se dice *cotejo*, véase este artículo.

CONFUSION. De la voz *confusio*, y con la misma significacion jurídica: mezcla de cosas, que no pueden reducirse á su primitiva especie, formando así un todo, diverso, individual, específico, ó genéricamente de sus componentes.

La definicion no es exacta; pero tampoco puede darse, pues la confusion es sobremanera casuística, y así la esponen las leyes. La exactitud resultará, sin embargo, de la esplanacion de la materia.

La confusion puede ser de cosas áridas ó líquidas, de las que se pesan ó miden, como trigo con arroz; vino con agua; y puede ser homogénea, como vino con vino, agua con agua, arroz con arroz, trigo con trigo; ó heterogénea, como agua con vino, vinagre con vino, trigo con arroz. Puede ser de sólidos fundibles, como oro con oro, plata con estaño; y eso en especie, ó de piezas labradas; en cuyo caso, perdiéndose la forma, hay destruccion irreparable, que agrava en su caso la reclamacion de daños y perjuicios.

De semovientes: como un rebaño, una peana:

De acciones, obligaciones, y conceptos legales, como si el acreedor hereda al deudor, ó el deudor al acreedor.

Y puede, en fin, implicarse todavía la confusion con variadas y posibles combinaciones.

El adelanto de las ciencias naturales hace hoy separables en muchos casos las especies diversas de una fusion metálica, lo que necesariamente dará á la cuestion diversa solucion en derecho, pues reducidos á su especie anterior á la confusion, renace el dominio respectivo.

Hemos dicho que la confusion, bajo el concepto jurídico, es casuística, ya por la diversidad indefinida de las combinaciones, ya por la intervencion y responsabilidad de las personas, ya por la legislacion, no habiendo una ley que la abarque en todas sus combinaciones y resultados. «*Si quod*, dice el jurisconsulto Pomponio, *quod ejusdem naturæ est, ita confusum est, atque commixtum, ut deduci et separari non possit; non totum; sed pro parte esse vindividandum, ut puta meum et tuum argentum in massam redactum est: erit nobis commune, et uterus quisque pro rata ponderis, quod in massa habemus, vindicabimus; etsi incertum sit quantum quisque ponderis in massa habet*» (ley 3.ª, tít. 1.º, lib. 3.º, Digesto). Habla, como se ve, de solo la confusion homogénea, cuando tantas veces es, y puede ser heterogénea, y no habla de las responsabilidades personales (Hablan de la confusion, y se hallan en el propio caso, todas las leyes del mencionado título: la 29, *De jure fisci*; 21, 50 y 71, *De fidejuss.*; 93 y 95, *De soluti*; 21, *De liberat.*; 41, *De evict.*; 12 y 18,

De his, quæ indigni; 58, *Ad sc. Trebell*; 30, *De servit. præd.*; 4, *De usufruct*; 6, *De manumiss.*; 27, *Quibus mod. usufruct. amitt*; 116, *De legat.*; y 36 *De ædil. edict.*; Digesto: 1 y 15, *Quemadmodum cerv. amitt.*; Código: *De ser. divis.*)

Si, aunque sea con dificultad, pueden separarse las cosas, ni hay verdadera confusion, ni tampoco hay cuestion, no siendo de daños y perjuicios, segun el caso; pero no de dominio y reivindicacion: cada uno conserva el de la suya y puede reivindicarlo.

La confusion puede ser espontánea, casual ó maliciosa. Si ha sido espontánea, el convenio mismo dará la norma de las acciones sobre el todo y sobre reclamaciones personales. Si ha sido casual, y por tanto sin intervencion, ni responsabilidad de sus dueños, el convenio entonces sobre la division ó sobre el destino del todo, será la ley del caso. Si hubiere sido maliciosa, las circunstancias del caso dan la ley de la responsabilidad. Puede, en fin, haber sido espontánea en un tercero de buena fé. Hace suyo el dominio de lo agregado y mezclado, y el caso es de *accesion*, y se resuelve por las leyes de esta.

Ya puede suponerse que muchas leyes de Partida seguirán en lo general á las romanas. «Fundiendo algunos dicen, oro ó plata, ó otro metal ageno, ó mezcládolo con otro suyo, sin placer de aquel, cuyo era, faziendo desto masa ó vergas, en salvo finca el señorío al otro cuyo era, en aquello que assí fundió, ó ayuntó con lo suyo, quier aya buena fé ó mala aquel que lo fundió, seyendo sabidor ó non, si es ageno ó suyo. Mas si por aventura dos omes ó tres ó mas se acordassen á fundir ó mezclar de so uno, oro, ó plata ó otro metal cual quisiesen, entonce aquello que se mezcla en uno, es comunal á todos, é finca en salvo á cada uno dellos el señorío, en aquello que ayuntó con lo de los otros, fasta en aquella quantía, ó peso, que fué aquello que y mezcló ó ayuntó. Esso mismo dezimos que seria en todas las otras cosas, que se mezclasen de so uno, que se pueden contar, ó pesar, ó medir, ó que los omes se acordassen con su plazer á mezclarlas, ó ayuntar lo de los unos con lo de los otros. Esto mismo dezimos aun que seria si las cosas se mezclassen desouno, sin plazer de sus señores; mas que por ocasion, si fuessen de tal natura que se non pudiessen apartar las unas de las otras, assi como si mezclassen del olió, ó del trigo de un ome con lo del otro, ó otra cosa qualquier semejante destas, que fuesen amas de una natura, ó de dos que se non pudiessen departir la una de la otra sin gran trabajo. Mas si las cosas, que se mezclassen por ocasion fuesen de natura, que se pudiessen apartar la una de la otra: así como si se mezclase el oro, de un ome con plata, ó con el estaño, ó el plomo de otro, tales cosas como estas, que se pueden apartar las unas de las otras por fuego, fundiéndolas, ó otras semejantes dellas, por tal ayuntamiento, como este, non son comunales; ante degimos que finca en salvo el señorío á cada un ome en lo suyo que así se ayunta, ó mezcla con lo de los otros.»

En la confusion de crédito, cuando es directa y absoluta, uno de los conceptos, ó mejor, la obligacion desaparece, pues nadie se debe ni se paga á sí mismo, como si el acreedor hereda al deudor ó viceversa: y como lo accesorio sigue á lo principal, se estingue tambien la fianza, ó la obligacion del fiador. No así cuando la confusion no es de principal y principal, sino de principal y accesorio, como si Pedro, acreedor de Antonio, es heredero de Francisco, fiador del segundo. La fianza se estingue, pero no el crédito principal, pues de este no ha habido confusion, y otra cosa seria segun lo principal ó lo accesorio.

En las herencias, en fin, aceptadas con beneficio de inventario, la confusion no alcanza sino á las fuerzas de la herencia; y al heredero en tal concepto le queda á salvo la repeticion de lo que la herencia no alcance á cubrir de sus créditos contra el finado testador.

CONGREGACION. Version de *congregatio*: reunion de personas, asociadas con un fin comun. Se aplica principalmente en asuntos eclesiásticos. Así la Iglesia se dice congregacion de todos los fieles cristianos. Hay congregaciones regulares, y son

Lorenzo Arrazola

las filiaciones de una órden religiosa, formadas por individuos de ella, que conservando la misma regla, abrazan y profesan una reforma de mayor austeridad por lo comun. Así la órden de San Benito está subdividida en diversas congregaciones, como la de Cluny, la de San Máuro. Si han obtenido la aprobacion pontificia, son verdaderas comunidades religiosas reformadas.

Hay congregaciones tambien de eclesiásticos seculares, y que viven en el siglo, ó sin vida comun, como las llamadas del oratorio, de la doctrina cristiana, y en la córte de España se conoce la de Sacerdotes de Madrid.

Las hay, en fin, de seglares, asociados para fines religiosos, como las cofradías; y para fines de piedad.

El Concilio de Trento mandó, que las congregaciones de regulares, que no estuviesen sujetas á un capítulo general, ó tuviesen visitadores regulares, se entendiesen sujetas á la Santa Sede, y en el término de un año se constituyesen en *congregaciones* por provincias, con subordinacion al ordinario, como subdelegado de Su Santidad (sess. 25, capítulo 8.° *De regularibus*).

Como toda congregacion constituye cuerpo, y ha de tener por tanto su constitucion ó estatutos, estos serán la regla de decidir en cada caso.

Aplícase tambien la denominacion á las secciones, en que se divide el colegio de cardenales, para auxiliar el régimen supremo de la Iglesia, como espresamos en el artículo siguiente.

CONGREGACIONES DE CARDENALES. Se comprende bien que, generalizado el catolicismo, se aumentaria inmediatamente el número de negocios eclesiásticos en Roma, y se haria mas y mas difícil el régimen de la Iglesia. Para auxiliar al Santo Padre, creóse entonces el cuerpo de cardenales, como decimos en su artículo. Formalizóse así el consejo del Papa, que, reunido, *officio officiando*, se denomina Consistorio; pero todo no podrá despachar en cuerpo. Comisiones pasajeras no dejaban precedentes adecuados, y se pensó en constituirlas perpétuas, segun el movimiento é importancia de los asuntos lo aconsejaba como necesario; y estas comisiones recibieron y conservan el nombre de *congregaciones*, que interesa conocer, como parte muy importante del derecho público eclesiástico.

Estas congregaciones tienen facultades perpétuas, ó que no espiran á la muerte de cada Pontífice; siendo, por consiguiente, ordinaria su jurisdiccion, conforme á las leyes ó estatutos por que fueron constituidas. Sin embargo, Sede vacante, y mientras los cardenales se hallen en cónclave, deben quedar en suspenso los negocios ordinarios, de que conocen las congregaciones, y que por su importancia corresponde despachar al cardenal prefecto de cada una; porque durante el cónclave, y mientras no se verifica la eleccion de Papa, no deben dedicarse los cardenales á ningun otro asunto, escepto en los casos de urgente necesidad ó grave peligro para la Iglesia. Pero aquellos negocios, para cuyo despacho basta, segun el procedimiento ordinario, la firma del secretario de la congregacion, deben tramitarse.

Son varias las congregaciones de cardenales: unas de índole general y para el régimen de la Iglesia; otras de índole política, para el régimen del reino romano; y de índole eclesiástica tambien; pero menos particulares. Aquellas las reseñamos á continuacion; haciendo solo indicacion de las segundas.

Congregacion del Consistorio. Esta congregacion, que no debe confundirse con el consistorio, pues son corporaciones muy diversas, fué establecida por Sixto V, mediante su constitucion *Inmensa*, en 22 de Enero de 1588. Tiene atribuciones, que el mismo romano Pontífice le señaló, para conocer en las causas sobre ereccion de nuevas iglesias patriarcales, metropolitanas y catedrales, y dotacion, capítulo, clero, y demás asuntos relativos á ellas, segun lo prescrito en el Concilio de Trento y en los decretos de los Santos Padres: para entender en todas las dificultades é incidentes que se susciten, y en las controversias entre las iglesias creadas anteriormente: en las uniones de parroquias ó mo-

nasterios, desmembraciones, sesiones, permutas, traslaciones y asignacion de pensiones, establecidas sobre las mismas: la pluralidad de conventos, la incompatibilidad de dignidades, las sobre presentaciones y nombramientos; y todo lo relativo á la edad y circunstancias de los que hayan de ser promovidos: «*eaque discussa et examinata, ad pontificem referant.*»

Además de esta *consistorial*, fué establecida por Benedicto XIV, en su constitucion *Ad apostólicæ*, de 17 de Octubre de 1740, otra congregacion particular *super promovendis ad episcopatum*; compuesta de cinco cardenales, cuyo oficio consiste en averiguar informándose con prudencia, quiénes pueden ser provechosamente nombrados para las sillas episcopales y arzobispales: ilustrar con sus consejos al Sumo Pontífice, para que promueva á los mas dignos, y examinar las causas de las traslaciones propuestas. El secretario de esta congregacion es auditor de la cámara apostólica, presidente ó prefecto es el Santo Padre.

Congregacion del Santo Oficio. Con el nombre de *Santo Oficio* se conoce una institucion de jueces, establecida por la Santa Sede, para proceder contra los reos *hæreticæ pravitatis.* Véase **INQUISICION.** Aunque los obispos, como jueces de la fé, deben cumplir esta mision en sus respectivas diócesis, porque en ellas son inquisidores *natos*; sin embargo, se dá el título especial de *inquisidores* á los jueces nombrados por el romano Pontífice.

En el siglo XIII comenzaron estos á ser enviados por varias regiones del globo, soliendo nombrarse religiosos del órden de San Francisco y de Santo Domingo, á cuyos generales y provinciales les fué concedida la potestad y carácter de *inquisidores*, por las constituciones *Odore movi*, de Inocencio IV: *Licet ex omnibus*, de Clemente IV, y *Olim præsentiens*, de Alejandro IV (1).

El prefecto de la congregacion del Santo Oficio es el Sumo Pontífice, diferenciándose en esta, como la anterior, de las demás, que son generalmente presididas por un cardenal con el dicho título de prefecto.

El número de los que la componen es mayor ó menor, segun lo considere oportuno el Papa, y se titulaban *inquisidores generales.* El secretario de esta congregacion es el decano del Sacro Colegio. Al servicio de la misma se hallan varios oficiales, como son el comisario, el asesor, el fiscal, el notario y otros de inferior categoría. Tiene además varios consultores, elegidos del clero regular y secular, entre los cuales debe siempre haber dos padres dominicos, que son el general de la Orden y el maestro del Sacro Palacio, y uno del órden de Menores. Tiene finalmente sus calificadores, encargados de censurar los escritos.

A la congregacion del Santo Oficio compete el conocer de todas las causas y materias sobre heregías, cismas, apostasía, magia, sortilegios, adivinaciones y abusos de los sacramentos; y asimismo le corresponde el conocimiento supremo sobre la Religion, no para establecer nuevos artículos de fé católica; sino para castigar los delitos que se cometan contra ella. Conoce igualmente de las apelaciones, que en estas materias se lleven á la Santa Sede, y de la revision de las sentencias de los obispos é inquisidores, en casos de discordia. En los asuntos de su competencia, tiene esta congregacion jurisdiccion sobre todos los patriarcas, arzobispos, obispos, inquisidores y demás personas, *licet præeminentes*; y le pertenece tambien, *cumulative* con la del *índice* y el maestro del Sacro Palacio, la jurisdiccion que á estos corresponde.

En tres formas procede la congregacion del Santo Oficio, segun la gravedad de los negocios; pues ya se reunen los consultores solos, ya con los cardenales, ya estos, bajo la presidencia del Sumo Pontífice. Con respecto al exámen y proscripcion de libros, se procede del modo especial, que en su constitucion *sollicita*, de 9 de Julio de 1753, determinó Benedicto XIV.

Congregacion del Indice. Toma su nombre del *índice* ó catálogo de los libros prohibidos.

(1) Pletembert, *Notitia congregationum*, página 603, ed. de 1693.

La Iglesia, como depositaria de la fé y doctrina de Jesucristo, tiene el derecho, no solo de declarar heréticos, erróneos ó nocivos los libros; sino tambien de prohibir su lectura y mandar que sean destruidos ó quemados. El Sumo Pontífice Paulo III, por su constitucion *Licet ab initio*, año 1542, dió este encargo á la congregacion del Santo Oficio; pero habiendo la reforma del siglo XVI, inundado de libros heréticos todo el Occidente, mandó Paulo IV, para impedir que con su lectura se contaminasen los fieles, formar y publicar un índice ó catálogo de aquellos, encargando á la congregacion de la Inquisicion ó Santo Oficio, el año 1557, que lo formase, y disponiendo en 1559 que fuese publicado. Para perfeccionar el *Indice*, los padres del Santo Concilio de Trento fueron autorizados por Pío IV, el cual poco despues aprobó nuevas reglas para el mismo, ordenando que todos las observasen, por su constitucion *Dominici gregis*, de 24 de Marzo de 1564; y Clemente VIII en 1594 mandó publicar por todo el mundo el *Indice*, con la adicion de muchos libros y nuevas declaraciones.

Posteriormente, en consideracion al estraordinario aumento de los negocios, que competian á la congregacion del Santo Oficio, estableció Pío V la especial del *Indice*, que Gregorio XIII, Sixto V y Clemente VIII confirmaron, otorgándole varios privilegios y facultades, que se hallan rectificados en la ya citada constitucion de Benedicto XIV, *Sollicita*, del 9 de Julio de 1753; en la cual estableció además el modo, en que habia de proceder la dicha congregacion, y varias reglas para que los consultores formen un juicio exacto sobre los libros, y puedan censurarlos en justicia.

Congregacion del Concilio. Fué establecida por Pío IV, con solo el fin de que promoviese la observancia de los decretos del Concilio tridentino, y presentase al Papa las dudas, que pudieran ocurrir sobre el sentido de los mismos. San Pío V le concedió además la potestad de decidir todas las causas y controversias referentes á la interpretacion del citado Concilio, y Sixto V, por su constitucion *immensa*, fecha 22 de Enero de 1587, arriba citada, amplió sus facultades, ordenándolas y determinándolas del modo siguiente. En primer lugar, se reservó la interpretacion de los decretos conciliares, relativos á la fé, ó al dogma, encomendando á la congregacion el declarar el sentido de los demás, aunque prévia consulta al romano Pontífice; *nobis tamen consultis*: y en segundo lugar, le concedió, entre otras facultades importantísimas, la de publicar los decretos de los concilios provinciales, prévio su exámen y aprobacion y la de establecer cuanto estime oportuno para la reforma de costumbres del clero y del pueblo; para la propagacion del culto divino, para escitar la devocion de los fieles y corregirlos, segun lo prescripto en el santo Concilio de Trento. Por consiguiente, como observa un ilustrado escritor, esta congregacion tiene verdadero poder legislativo sobre todas las materias, espuestas en la constitucion de Sixto V, escepto las causas de fé (1).

El Papa Gregorio XIV la facultó para que publicara sus rescriptos, *nomine Pontificis*, y goza de facultad para *interpretar* el Concilio, de poder *judicial* para decidir las controversias, escepto las tocantes al dogma, y de potestad *legislativa* para establecer reglas de disciplina. Tambien le corresponde, segun las constituciones *Justitiæ*, y *Si datam*, publicadas por Benedicto XIV, á 9 de Octubre de 1746, y 4 de Marzo de 1748, conocer en las causas matrimoniales, que se remiten á la Sede Apostólica, y en las de nulidad de profesion monástica.

Se halla dividida en dos secciones, ó congregaciones particulares; una que conoce especialmente en todo lo relativo á los límites y estado de las iglesias, segun el resultado de las visitas episcopales; y otra, establecida por el Sumo Pontífice reinante, Pío IX, que entiende en todo lo que respecta á los sínodos provinciales.

Componen esta congregacion los cardenales, llamados *intérpretes del Concilio Tridentino*, uno de los cuales, el prefecto, suscribe los decretos de la congregacion con el secretario, que suele ser un obispo titular, ó *in par-*

(1) Bouix, *De curia romana*, part. 2.ª, capítulo IV.

tibus infidelium, el cual tiene su auditor, que es un cargo de suma importancia, además de otras personas que contribuyen al mejor despacho de los asuntos. Tiene la misma un modo propio de proceder, y distinto, segun que los negocios son de aquellos que no se proponen *in congregatione*, ó de los que se proponen *per summaria precum*, ó de los que se presentan *in folio* y se resuelven *ex officio*, ó de los que se despachan *servato juris ordine*.

Los decretos de esta congregacion, anteriores al año 1718, se conservan manuscritos en una larga série de volúmenes, llamados *libri decretorum*; y los posteriores á la citada fecha han sido impresos, formando la coleccion titulada *Thesaurus resolutionum*.

Congregacion de ritos. Fué instituida por Sixto V, mediante su constitucion *Immensa*, antes citada, de 22 de Enero de 1587, en la cual se espresan los asuntos, en que debe ocuparse, á saber: los relativos á los ritos y ceremonias, que en todas las iglesias y en la capilla Pontificia han de observarse: acerca de la misa y divinos oficios, administracion de los Sacramentos y demás cosas, tocantes al culto, así como la reforma y correccion de los libros del ceremonial, pontifical y ritual romanos. Tambien es de su incumbencia el cuidar de la canonizacion de los Santos, de la celebracion de los dias festivos, de las recepciones de los reyes, príncipes y personajes notables en la Corte pontificia; de las cuestiones de etiqueta, que suelen promoverse sobre los puestos de preferencia en las procesiones y fiestas oficiales, y otros negocios semejantes. Se debe notar, que aunque esta congregacion interviene en las discusiones de las causas sobre beatificacion y canonizacion, sin embargo, no le corresponde decretarlas ó fallarlas, pues esto es propio esclusivamente del Sumo Pontífice, en el consistorio, despues de oir el dictámen de todos los cardenales y obispos presentes en Roma.

Componen esta congregacion el cardenal prefecto, muchos cardenales y consultores, un secretario y un vice-secretario, el canciller y el *hymnógrapho*, á quien corresponde ordenar todo lo relativo á los oficios de los Santos. Intervienen tambien en sus asuntos los maestros de las ceremonias apostólicas, cuyo voto se tiene en cuenta, sobre las cuestiones de sagrados ritos. Entre los consultores hay algunos *natos*, por disposicion de Benedicto XIV; cuales son el obispo prefecto del sagrario apostólico, vulgarmente titulado *sacrista*; el protonotario de la congregacion de sagrados ritos; los tres auditores mas antiguos de la Rota; el auditor del Sumo Pontífice, el asesor de la congregacion del Santo Oficio, el maestro del Sacro Palacio, el promotor de la fé y el secretario de la misma congregacion de ritos.

La congregacion de ritos suele distinguirse en *ordinaria* y *estraordinaria*; dividiéndose esta en comisiones llamadas *ante-preparatoria*, *preparatoria* y *general*. La *ante-preparatoria*, establecida con posterioridad á Urbano VIII, é Inocencio XI, en cuyos decretos no se hace mencion de ella, se celebra para discutir, en los procesos de beatificacion ó canonizacion, las dudas sobre virtudes, martirio ó milagros, interviniendo los consultores y maestros de ceremonias. La *preparatoria* tiene lugar para ilustracion de todos los cardenales; y la *general* se verifica en presencia del Sumo Pontífice, emitiendo en ella su voto, primero los consultores y luego los cardenales, sobre las virtudes, milagros ó martirio, y sobre la procedencia ó improcedencia de la beatificacion ó canonizacion. Esta congregacion *general* suele reunirse dos veces á lo sumo cada año, no discutiéndose mas que un proceso en cada uno.

Congregacion ordinaria es aquella, en que se dirimen todas las demás cuestiones, relativas á los sagrados ritos y culto divino, aunque alguna vez se acostumbre discutir tambien ciertas dudas respecto á beatificacion ó canonizacion. En esta congregacion *ordinaria* se hallan presentes el cardenal prepósito, el *sacrista*, el protonotario, el secretario, el promotor de la fé y los maestros de ceremonias.

En algunas ocasiones sucede que no se reunen todos los cardenales y consultores; sino solo aquellos á quienes el romano Pontífice se lo manda; y entonces la congregacion se llama *particular*, segun Benedicto XIV, in-

terviniendo en ella el secretario y el promotor de la fé. Estas congregaciones ó comisiones ordinarias y estraordinarias, tienen fijado su respectivo modo de proceder, y todas se hallan obligadas á guardar el mayor secreto, bajo ciertas penas eclesiásticas (1).

Las decisiones y decretos de la congregacion *ordinaria* forman una coleccion, llamada *gardelliana*, que fué publicada hasta 1826 por Alonso Gardellinio, continuada por José de Ligne hasta 1848, y completada hasta 1856 por Capalti, secretario de la misma congregacion de ritos.

Congregacion sobre la disciplina regular. Por la afinidad y conexion íntima, que entre ambas existe, hablarémos simultáneamente de esta congregacion y de la titulada: *Sobre el estado de los regulares.* Esta última fué establecida por Inocencio IX, para resolver las cuestiones sobre conventos, monasterios, colegios y otras casas de monjes ó regulares de cualquiera órden mendicante de Italia y las islas adyacentes; así como para mudar, trasferir, suspender y suprimir el noviciado y á los profesores; para fijar el número de religiosos en cada convento; para decidir las contiendas que en tales asuntos pudieran suscitarse; para promover la ejecucion de los decretos de Clemente VIII, sobre reforma de los regulares, y para los demás asuntos relativos á esta materia. El Papa Clemente IX confirmó dicha congregacion, por su constitucion *Injuncti*, de 11 de Abril de 1668.

Posteriormente, en 4 de Agosto de 1698, Inocencio XII, en su constitucion *Debitum*, declaró que habia sido por él establecida la congregacion *sobre la disciplina regular*, y la confirmó, haciendo extensivas á todo el orbe católico las facultades que la otra congregacion, *sobre el estado de los regulares*, tenia, limitadas á Italia y las islas adyacentes. Por tanto, esta congregacion quedó como refundida en la creada por Inocencio XII; y estinguida estuvo de hecho, hasta que Pio IX, por su decreto de 7 de Setiembre de 1846, instituyó otra, con el mismo título de *Statu regularium ordinum*, cuyos fines expresó en su encíclica *Ubi primum*, de 17 de de Junio de 1847, dirigida á los superiores de las órdenes religiosas.

Esta nueva congregacion se compone de varios cardenales, y su secretario es el mismo de la congregacion *Episcoporum et regularium*, de que hablaremos despues.

No suprimió el Sumo Pontífice reinante la titulada *super disciplina regulari*, pero introdujo en ella una alteracion muy notable, disponiendo que el cardenal, prefecto de la de *obispos y regulares*, ejerciese juntamente la prefectura de aquella, cuya importancia ha disminuido considerablemente en nuestros dias, como es fácil conocer.

La nueva congregacion *De statu regularium* ha publicado varios decretos de sumo interés, tales como el de 25 de Enero de 1840, sobre toma de hábitos y profesion de novicios; el de 1848, sobre las testimoniales de los obispos, que deban presentar los que solicitan el hábito religioso; los de 1.° de Mayo de 1851 y 19 de Marzo de 1857, declaratorios de varios puntos sobre la misma materia y otros no menos importantes.

Congregacion de obispos y regulares. Así se llama una de las congregaciones de Cardenales, no porque no se componga de obispos y regulares; sino porque á ella se recurre en consulta sobre sus negocios.

Antiguamente habia dos congregaciones, una *super consultationibus Episcoporum*, que ya existia en tiempo de Gregorio XIII, ó creada por este Papa, segun el sentir de algunos escritores, y otra *super consultationibus regularium*, establecida en 17 de Mayo de 1586, por Sixto V, en virtud del Breve *Romanus Pontifex*. Dos años despues, en 22 de Enero de 1588, el mismo Sixto V, por su constitucion *Inmensa*, antes citada, al establecer varias congregaciones, además de las que existian entonces, confirmó separadamente las dos de que hablamos, y que por su conexion íntima han venido á formar una sola, con el título que arriba hemos espresado (1).

(1) Ferraris, *Bibliotheca*, art. RITUS.

(1) Luca, relat. *Romanæ Curiæ*, dis. 1.

Se compone de veinticuatro cardenales, cuyo prefecto es el mas antiguo entre ellos, y de un prelado, que desempeña el cargo de secretario; teniendo además un subsecretario, un *sumista*, cuyo oficio consiste en esponer ó relatar sumariamente las causas; un juez, que hace esto mismo en presencia de los cardenales reunidos, cuando se apela á la sagrada congregacion de las sentencias de la curia episcopal, y un procurador general del fisco, que en los negocios criminales interviene para defender la sentencia apelada. En las causas de mayor gravedad, é importancia, la misma congregacion designa un cardenal, para que de cada una de ellas *videat et referat*, y á quien se dá el tratamiento de *eminentisimus relator*. Esta congregacion carecia de consultores, hasta que en Setiembre de 1834 se mandó que los tuviese, á semejanza de otras congregaciones.

La de que hablamos, suele ser conocida en Roma con el adjetivo *occupatissima*, por su multitud é importancia de los negocios en que entiende. Son de su competencia, por regla general, todos los que se relacionan con los obispos y con la recta administracion de las diócesis; como por ejemplo, los recursos, que contra el ordinario elevan á la Santa Sede sus mismos diocesanos, legos ó regulares; los que se formulan contra los vicarios generales ú otros delegados de los obispos; el conocimiento de las causas *menores* contra éstos, para discutir y terminar las cuales tiene jurisdiccion ordinaria; la alta inspeccion sobre el modo de gobernar las diócesis, cuando el prelado está enfermo ó impedido por algun motivo; la resolucion de las contiendas y discordias que alguna vez se originan, sobre eleccion de vicario capitular, Sede vacante, y otros negocios de análoga importancia.

Tambien le incumbe conocer en las cuestiones, que se promueven entre las diversas familias de regulares; en las discusiones que se suscitan dentro de una misma órden, con motivo de la eleccion de superiores ó con otras causas; en la traslacion de los religiosos de uno á otro monasterio; en las fundaciones ó supresiones de conventos, y en otros negocios semejantes. Y en general se puede decir que esta congregacion tiene que conocer, mas ó menos, en todas las causas religiosas, escepto las cuestiones relativas á la fé ó á la interpretacion del Concilio de Trento, y algunas otras, en que *privativamente* entienden ciertas congregaciones determinadas.

El modo de proceder esta congregacion es distinto del que antiguamente practicaba. La tramitacion y solemnidades del juicio son diferentes, segun que los asuntos son levísimos, de aquellos que *in congregatione non proponuntur* y son resueltos por el prefecto y el secretario, aunque en nombre y con la autoridad de la sagrada congregacion; ó de los que por su importancia *per secretarium in congregatione proponuntur*, pero omitiéndose ciertos trámites y fórmulas (*non servato juris ordine*), para cuyo despacho se reunen los cardenales todos los meses, féria 6.ª, en el palacio apostólico; ó segun que los negocios son de la mayor importancia, y se despachan con toda solemnidad, *servato juris ordine*, en la forma determinada por decreto de la misma congregacion, en Setiembre de 1834. En las causas criminales, que van á ella en apelacion, se observan las reglas del decreto de Enero de 1835, aprobado y mandado publicar por Gregorio XVI.

Congregacion de propaganda fide. Fué establecida por Gregorio XV, por su constitucion *Inscrutabili*, de 22 de Junio de 1622, dándole ámplias facultades para conocer y arreglar los asuntos relativos á la propagacion de la fé católica, procurando el mejor órden en las misiones y que haya en ellas el número necesario de ministros. Los negocios graves se comunican al romano Pontífice, siendo competente la congregacion para resolver los demás, segun las reglas de la prudencia.

Su jurisdiccion se estiende á todas las partes del mundo, divididas en dos clases de *regiones*: unas *hierarchiæ ordinariæ*, así llamadas, porque en ellas hay sedes y diócesis canónicamente erigidas, y obispos con jurisdiccion ordinaria; y otras que se titula *missionum*, porque carecen de obispos y diócesis,

siendo administradas en lo espiritual y eclesiástico por vicarios y delegados del Sumo Pontífice, que suelen estar revestidos de carácter episcopal, llevando el título de algunas iglesias antiguas, de las que solo se conserva el nombre; y por esta razon se llaman obispos *titulares* ó *in partibus infidelium*.

La potestad de esta Congregacion es muy lata, en cuanto á las especies de materias y causas en que entiende, supuesto que, segun dejamos indicado, Gregorio XV no le puso mas limitaciones, que la obligacion de dar cuenta de los asuntos graves al romano Pontífice; viniendo á tener, por consiguiente, una triple potestad legislativa para promulgar leyes y decretos sobre los negocios de su competencia, judicial, para dirimir todas las controversias, y gubernativa para regir y gobernar como súbditos suyos á los misioneros, y aun á los vicarios apostólicos.

Los decretos de esta Congregacion tienen el mismo valor que las constituciones apostólicas, segun la citada de Gregorio XV, y conforme á un decreto de Urbano VIII, confirmado por Inocencio X, á 30 de Julio de 1625.

Los Sumos Pontífices dispusieron que todos los negocios fuesen despachados *gratis* por esta congregacion, á cuyo efecto la dotaron con los emolumentos y recursos necesarios; y en tiempo de Urbano VIII se edificó un hermoso palacio, donde habitan el secretario y varios oficiales ó ministros inferiores de la congregacion, que en él celebra sus sesiones. En este palacio se halla establecido tambien el colegio *de propaganda fide*, en que se educan los jóvenes eclesiásticos que se consagran á las misiones, y en el mismo se hospedan los obispos y sacerdotes pobres.

Sus constituciones y decretos comenzaron á publicarse en 1839, en una coleccion, titulada *Bullarium de propaganda fide*.

Esta congregacion se compone de muchos cardenales, entre ellos el prefecto general y el que desempeña *ecconomiæ præfecturam*, un secretario, los consultores que elige el clero secular y regular, y varios oficiales ó subalternos. Sus juntas son *ordinarias* y *generales*. Las *ordinarias* se celebran solo con la asistencia del cardenal prefecto, el secretario y los oficiales necesarios, y en ellas se da cuenta de los negocios y estado de las misiones, segun las cartas y noticias recibidas, señalándose los que se han de someter á la congregacion general, y despachándose desde luego los de menor importancia. Las juntas *generales* son las que celebran todos los miembros de la congregacion, para resolver los asuntos árduos, de los cuales hace una relacion el secretario, cuando no son muy graves y complicados, recayendo acto contínuo la decision de los padres; ó bien se llevan las causas originales (*in folio*) á la congregacion, cuando son de suma dificultad, para que los cardenales se instruyan debidamente, antes de dictar sentencia.

Congregacion de negocios eclesiásticos. En 1814 fué instituida por Pío VII esta congregacion, que tambien suele ocuparse en los negocios *estraordinarios*. Los grandes acontecimientos políticos, que en aquella época pusieron en conmocion casi á toda la Europa, obligaron al romano Pontífice á crear, para que fuesen con toda premura despachados ciertos asuntos graves y urgentes, esta congregacion, compuesta de ocho cardenales, un secretario con voto en ella, y cinco consultores.

La competencia de esta congregacion no se halla limitada á los negocios de cierta y determinada especie; sino que conoce indistintamente, de todos aquellos cuya resolucion apremia, por cualquier circunstancia especial; pero suele conocer principalmente de los que afectan á la materia de concordatos y las relaciones de los Gobiernos con la Santa Sede.

Todos sus miembros se hallan obligados á guardar el mayor sigilo, bajo la religion del juramento y ciertas penas gravísimas. Celebra algunas veces sus reuniones en presencia del Papa.

Congregacion de las indulgencias y sagradas reliquias. Fué establecida por Clemente IX, mediante su constitucion *In ipsis*, de 6 de Julio de 1669, concediéndole facultades para resolver las dudas, que surgiesen respecto á las reliquias é indulgencias, prévia

consulta al romano Pontífice en los casos graves y difíciles; para corregir y enmendar los abusos en estas materias; para prohibir la impresion de las indulgencias falsas, apócrifas ó indiscretas; para reconocer y examinar las reliquias, que nuevamente sean halladas, y para todo lo relativo á esta clase de asuntos, debiendo proceder siempre piadosa y santamente. Sin embargo, esta congregacion no conoce de las causas relativas al dogma; y así, por ejemplo, si alguno negara la potestad de la Iglesia para conceder indulgencias, ó la veneracion debida á las reliquias de los santos, seria juzgarlo, no por la congregacion de las indulgencias y sagradas reliquias; sino por la del Santo Oficio.

Conforme á un decreto de la congregacion espresada, aprobado por Benedicto XIV, en 28 de Enero de 1756 y confirmado por Pío IX, en 14 de Abril de 1856, las concesiones generales de indulgencias, que se obtienen del Sumo Pontífice, son nulas é irritas, mientras no se pide un ejemplar ó copio de las mismas á la secretaría de dicha congregacion.

Consta esta de muchos cardenales, con su prefecto, un secretario, un sustituto y varios consultores. Su modo de proceder es muy sencillo. Se reduce á someter al juicio de uno de los consultores la duda suscitada; y despues de oir su dictámen, los cardenales congregados la resuelven con su voto.

Congregacion sobre la residencia de los obispos. El romano Pontífice Urbano VIII creó esta congregacion, encomendándole el cumplimiento y fiel observancia de las leyes eclesiásticas, relativas á la obligacion que tienen los obispos de residir en sus respectivas diócesis. La forman el cardenal vicario, como prefecto, los secretarios de Estado y de los Breves, y los de las congregaciones de obispos y regulares y del Concilio, y el secretario propiamente dicho de la misma.

Con fecha 3 de Setiembre de 1741 publicó Benedicto XIV la constitucion. *Ad universae*, confirmando esta congregacion, añadiéndole un promotor fiscal, y mandando que no celebre sus reuniones regular ó periódicamente; sino en los siguientes casos: cuando el romano Pontífice la delegue el conocimiento de algun negocio; cuando se haya de deliberar sobre las penas que corresponden á los trasgresores, si bien para su aplicacion ha de consultarse préviamente á la Santa Sede; ó cuando se haya de conceder indulto apostólico á algun obispo por falta de residencia, en virtud de causas determinadas.

El mismo Benedicto XIV le prescribió la regla, que ha de seguir, acerca de la concesion ó denegacion de las licencias que pidan los obispos.

Congregacion de la inmunidad eclesiástica. Fué establecida tambien por Urbano VIII, siendo su principal objeto proteger y defender la jurisdiccion é inmunidad eclesiástica, así la personal, como la real y local.

Se compone de cardenales y prelados, teniendo estos el encargo de instruir y relatar sumariamente las causas, á semejanza de los *ponentes* en la curia. En esta congregacion se procede de un modo estrajudicial, sin formacion de causa ó espediente, propiamente, dicho; pero se dirijen cartas familiares, á los ordinarios, á los nuncios apostólicos y otros prelados eclesiásticos, á quienes corresponde el asunto, para adquirir informes y para que se cumplan los decretos y resoluciones de la congregacion.

En la mayor parte de los pueblos se hallan actualmente precavidos, en virtud de los concordatos con la Santa Sede, los conflictos y controversias que pudieran surgir, acerca de la inmunidad y jurisdiccion eclesiásticas; y cuando se suscita alguno, suele arreglarse por la secretaría de Estado del gobierno romano.

Además de estas congregaciones, hay otras compuestas ó presididas por cardenales, para asuntos de diverso carácter; como son la de la fábrica de San Pedro, que conoce de los legados para obras pías, de las cuales una parte pertenece á la iglesia de San Pedro: las que se ocupan en asuntos puramente civiles, relativos á la ciudad y campiña de Roma: la titulada *de consulta*, que viene á ser el consejo del Papa, y tiene á su cargo los negocios concernientes al dominio de la Iglesia: la de policía general, llamada *de bono regimine*: la de moneda, que tiene á su cargo, además

de la fabricacion de las que circulan en los Estados Pontificios, fijar el precio y valor de las estranjeras: y la titulada de las limosnas, que cuida de la subsistencia de Roma y del estado elesiástico. Véase CURIA ROMANA.

CONGRESO. Version de *congresus*; reunion, junta: esta voz del verbo *congredior*, andar juntamente, y este verbo de *gresus*, paso, y la preposicion *cum*.

En el derecho internacional se dá, á veces, el nombre congreso á las reuniones diplomáticas de representantes de varios paises, nombrados por sus Córtes ó Soberanos, para tratar, y preparar soluciones en asuntos políticos de interés comun; y en cada caso ha de estarse á las circunstancias especiales del mismo.

En España, introducido el régimen representativo, y cuando las Córtes ó Parlamento se han compuesto de dos cuerpos, se ha dado el nombre de *Congreso de los Diputados* al de índole mas popular, por provenir solo de la eleccion del pueblo, como puede verse en las Constituciones políticas de 1837 y 1845.

El Congreso era igual en facultades al Senado, que era el otro cuerpo. Se renovaba, en totalidad, siempre que habia disolucion de Córtes; y de todos modos terminaba una legislacion, que por la Constitucion de 1845 duraba cinco años.

Por la Constitucion de 1837 tenia la prerogativa de que las leyes, sobre contribuciones y crédito público, se habian de presentar primero en el mismo; y si despues en el Senado sufrian alguna alteracion, que el Congreso no admitiera, mediando la comision mista, pasaba á la sancion de la Corona lo aprobado definitivamente por el mismo (artículo 37).

Por la Constitucion de 1845 perdió el Congreso esa segunda prerogativa, quedándole solo la de que dichas leyes se hubiesen de presentar primero en el mismo (art. 36).

Por ambas Constituciones tenia la facultad de aprobar los poderes de sus diputados, nombrar su presidente, vice-presidentes y secretarios, y formar el reglamento para su régimen interior.

Alguna vez los dos cuerpos del Parlamento se han denominado *estamento*, y los individuos del estamento popular procuradores, como en las Córtes del Estatuto Real. Véase su artículo.

Por la Constitucion de 1.° de Junio de 1869, las Córtes se componen tambien de dos cuerpos, ó cámaras, y la popular se llama asimismo Congreso. Acerca de ella dice la espresada Constitucion:

«Art. 38. Las Córtes se componen de dos cuerpos colegisladores, á saber: Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades, escepto en los casos previstos en la Constitucion.

»Art. 39. El Congreso se renovará totalmente cada tres años. El Senado se renovará por cuartas partes cada tres años.

»Art. 45. Cada uno de los cuerpos colegisladores tendrán las facultades siguientes:

1.° Formar el respectivo reglamento para su gobierno interior.

2.° Examinar la legalidad de las elecciones y aptitud legal de los individuos que la compongan.

Y 3.° Nombrar, al constituirse, su presidente, vice-presidentes y secretarios.

Mientras el Congreso no sea disuelto, su presidente, vice-presidentes y secretarios continuarán ejerciendo sus cargos durante las tres legislaturas.

El presidente, vice-presidentes y secretarios del Senado se renovarán siempre que haya eleccion general de dichos cargos en el Congreso.

»Art. 48. Las sesiones del Senado y las del Congreso serán públicas, escepto en los casos que necesariamente exijan reserva.

»Art. 50. Los proyectos de ley sobre contribuciones, crédito público y fuerza militar, se presentarán al Congreso, antes que al Senado; y si este hiciere en ellos alguna alteracion, que aquel no admita, prevalecerá la resolucion del Congreso.

Art. 54. La iniciativa de las leyes corresponde al Rey y á cada uno de los cuerpos colegisladores.....

»Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado, al menos, por cada 40,000 almas de poblacion, elegido con arreglo á la ley electoral.»

CÓNGRUA. De igual voz latina, con la misma significacion, de cosa adecuada, competente, suficiente para el fin de que se trata. En la palabra latina *cóngrua*, se sobreentiende *portio* y *sustentatio*; y con igual significacion que en castellano, se aplica técnicamente á la competente sustentacion del sacerdote, que sirve al altar; muy principalmente con cura de almas, como párroco, teniente de párroco, ecónomo, vicario, coadjutor. Estiéndese tambien, como se dirá, al que sirve al altar sin cargo de almas, como simples capellanes; y en un sentido lato, al episcopado y alto clero catedral y colegial.

La cóngrua encierra desde luego tres cuestiones: el derecho á ella, el modo ó forma de asegurarla, y la cuantía.

El derecho á ella es la retribucion del trabajo, que de justicia y además por conveniencia, se debe siempre y en todo caso al que lo presta. Se debe así, aun por justicia natural, pues que el trabajo para subsistir, para asegurar la competente sustentacion, es ley del género humano.

Y se debe así por derecho social y por derecho civil, pues sancionada por la sociedad la acumulacion de la riqueza, ya individual ya corporativa, el trabajo personal, y su proteccion por la ley, es de absoluta necesidad: idea que esplanamos en otros artículos, evidenciando allí que la necesidad del trabajo y de su justa retribucion no nace solo del hecho social de la acumulacion de la riqueza; sino del natural y providencial al mismo tiempo, de no haber producido el Hacedor tanta riqueza material, que baste para todo el género humano, haciendo así necesario y posible, que el hombre ejercite las muchas facultades individuales de que le ha dotado.

Ejercitándolas para asegurar su conveniente sustentacion, nada más evidente que el derecho á la retribucion, con su fin individual y social, de la sustentacion adecuada, al paso que inexcusable. En tal supuesto, ¿por qué derecho desconocido, por qué género de prevenciones habria que evidenciar la justicia de la cóngrua eclesiástica?

Ya hemos visto que, natural y socialmente es debida; pero todavía el servicio del altar es de tal índole, de tan necesario desinterés humano, que hace rechazar toda retribucion mercenaria. Ciertamente: y aun por derecho, se rechazará canónicamente el concepto y precio venal: por eso, en determinados casos, constituye un crímen eclesiástico la simonía; por eso en otros, la justa remuneracion se llama *oblata*; en otros hasta limosna, como en el estipendio de misas. Pero sobre todo domina una idea y una necesidad includible: para servir es preciso vivir; para vivir, la cóngrua sustentacion. Así queda evidenciada á todas luces su justicia. La conveniencia social y el respeto religioso buscaron y hallaron frases y denominaciones de valor entendido, y tal es la que hace cabeza del presente artículo. Dentro de esta salvedad el texto sagrado consignará, y repetirá la Iglesia: *dignus est operarius cibo suo* (San Mateo, cap. 10, v. 10): *dignus est enim operarius mercede sua* (San Lúcas, cap. 10, v. 7): *qui altari servit, de altare vivat* (Concilio IV de Letran y decretal *Extirpandæ*): *dignus est ut presbyteri, qui seminant spiritualia, metant temporalia.* (San Pablo, 1.ª ad. *Corinth.*, cap. 9.º). A lo que hay que añadir las multiplicadas declaraciones de los concilios, aun generales, como el de Trento y Lateranense citado; la general y constante práctica de la Iglesia y las declaraciones, en apoyo, de las leyes civiles, como veremos.

En la evidencia incontestable de ser debida la cóngrua, se la ve reconocida en principio, y practicada, segun lo permitian los tiempos, desde el orígen de la Iglesia, variando, segun aquellos, el modo y los medios. En los tiempos primitivos se atendia á la sustentacion de los sacerdotes con los bienes que los fieles entregaban y se poseian en comun (*Actas de los Apóstoles*, cap. 2.º, vers. 44, 45 y 46). Despues con las colectas y oblaciones (1.ª *ad Corinth.*, cap. 16); práctica y medio que ha continuado hasta nuestros dias.

Sucesivamente se agregaron las donaciones y fundaciones, por cuyo medio la Iglesia tuvo bienes considerables desde los primeros siglos: bienes, que ya escitaron la codicia de los imperantes, despojando de ellos á la Iglesia con violencia; si bien fué reintegrada, y

confirmada en ella el derecho de adquirir, por Constantino, y continuado despues, hasta ya entrado el presente siglo.

A los mencionados recursos se agregó y vino aumentándose con los tiempos y con las constantes declaraciones y sanciones de la Iglesia, y á su vez de las leyes temporales, el acerbo decimal, ordenándose por aquella, cuando el ingreso y las necesidades se aumentaron, que dicho acerbo se dividiese en cada diócesis en tres porciones: una para la mitra, otra para el clero, y otra para los pobres.

En medio de las constantes declaraciones de los concilios, sobre la necesaria y competente sustentacion del sacerdote con funciones activas en el servicio de la Iglesia, nunca en ellas se fijó la cantidad y ni casi podia, habiendo de ser relativa al cargo y sus fatigas, al rango y á las circunstancias de tiempo y lugar, y por tanto, á la escasez ó abundancia, y á la baratura ó carestía. Así la frase doctrinal y técnica de los concilios y de los canonistas, *portio congrua, congrua sustentatio*, indicaba bien que esa porcion lo era de algun todo; y que la cuantía se encomendaba á la autoridad y prudencia de alguien: el todo, era el conjunto de los bienes y recursos de la Iglesia en cada diócesis; y respectivamente en su caso, de cada iglesia ó feligresía particular: el encargado de determinar la porcion cóngrua, la sustentacion competente, era el diocesano.

Y con efecto: en un principio el obispo, para desempeñar la cura de almas y demás cargos espirituales en una localidad, deputaba un sacerdote y le asignaba la cóngrua sustentacion, de los bienes de aquella iglesia, si los tenia; y sino, de los de la Iglesia universal en la diócesis, segun antes quedan reseñados.

Despues, regularizado el servicio eclesiástico local, siempre luchando con los tiempos, en vez de nombramientos accidentales ó casuísticos de sacerdotes, se crearon *títulos* fijos, títulos canónicos, localidades, y siempre sobre el principio *beneficium propter officium*, con solo la lamentable escepcion de los *beneficios simples* y *sine-cura*; y sucesivamente aumentaron la tecnología canónica, las denominaciones de títulos canónicos, *beneficios curados*, beneficios *simples*, parroquias, y párrocos, *curas* de almas, y aun otros análogos.

Las turbaciones de los tiempos hicieron que, ya por comision, ya por abuso, una gran parte de los bienes de la Iglesia, y muy especialmente los diezmos, se concentrasen en corporaciones monacales, y sobre todo en manos de legos, con evidente perjuicio de la cura parroquial. Desatendido este servicio, tuvieron que multiplicarse las determinaciones y sanciones canónicas, para que se obligase á dichos poseedores á señalar cóngrua sustentacion á los párrocos, y á los coadjutores, de que estos debian ayudarse, si las necesidades espirituales lo requerian; creándose, en su caso y á cargo de los monasterios y catedrales, y poseedores de diezmos, vicarios perpétuos. (Concilio de Letran citado: Concilio de Trento, sess. 6.ª, cap. 2.º: sess. 7.ª, *De reform.*, cap. 5.º: sess. 21, cap. 4 y sess. 24, cap. 12 y 23: y en el Cuerpo del derecho cap. *De monachis*, 12: cap. *De rectoribus*, 3: cap. *Extirpandæ*; y cap. *In lateranensi*).

En un principio, los cabildos catedrales y colegiales, solian componerse de monjes de la órden de San Benito, ó de la de San Agustin, que, como queda dicho, eran poseedores de diezmos y con ello tenian su cóngrua. Entró sucesivamente el clero secular, dándosela ó señalándosela sobre el acervo decimal, y porque así se daba ó sañalaba á los capitulares, del latin *prebeo*, dar ó conceder, el cargo, y la retribucion ó cóngrua, se llamaron *prebendas*.

Mucho se habia hecho y se hacia para asegurar la justa sustentacion del clero, no solo parroquial; sino en general. Además de lo dicho hasta aquí, se mandaron suprimir y unir las capellanías eclesiásticas ó no familiares, y los beneficios incóngruos (concilio de Trento, ses. 21, cap. 5), y aplicar su producto á la cóngrua parroquial, llegando á ordenar los concilios, que cuando no hubiese otro medio de asegurarla, la pagase la misma feligresia, esto es, los fieles que recibian el servicio del párroco ó vicario: *si necesse fuerit, compellere posiit populum* (el obispo), *subministrare*,

quæ sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum substentandam (Concilio de Trento, dicha sesion 21, cap. 4.°).

A su vez el poder temporal, por los mismos principios de justicia y necesidad, secundaba en su esfera, las determinaciones de la Iglesia, mucho mas en España, en la cual la Religion católica era la única del Estado, y donde, como es sabido, el concilio de Trento habia sido publicado y mandado observar, como ley del Reino.

Además de ella, y entre otras disposiciones, á consulta de 7 de Diciembre de 1677 y otras posteriores, dispuso Cárlos II que se reunieran las capellanías, por supuesto eclesiásticas no familiares, incóngruas, suprimiéndose á juicio del ordinario, las que carecieran de rentas bastantes para que el clérigo viviese con decoro (ley 1.ª, tít. 16, lib. 1.° Nov.). Sobre este punto se espidió tambien la Real órden de 9 de Marzo de 1777, dirigida á los ordinarios. En ella se dispuso que, en atencion á que la tasa sinodal era muy escasa, por las circunstancias de la época, señalase cada prelado para su diócesi la nueva *cóngrua* que, atendida la calidad del país, estimara correspondiente á la decorosa manutencion del beneficiado, debiendo ser mas crecida la de los curas, por la estrecha obligacion de su cargo en la administracion del pasto espiritual y socorro de los feligreses necesitados; no debiendo subsistir, con perjuicio de su *cóngrua*, las reparaciones y desmembraciones, hechas para erigir diferentes beneficios, que están sujetos á reversion, siempre que el cura carezca de la necesaria *cóngrua* sustentacion. Cuando, por falta de beneficios, no se pudiera proveer en esta forma, debian los obispos asignar á los párrocos, segun el Concilio de Trento (dicha ses. XXIV, cap. 13 *De reforma*) la parte de primicias ó diezmos que fuera necesaria (ley 2.ª). Por el mismo motivo y con arreglo á las facultades concedidas por el Concilio (ses. VII, cap. 7.° *De reforma*), se encargó á los ordinarios que cuidasen de que los curatos, unidos á iglesias, monasterios y comunidades, fueran desempeñados por vicarios perpétuos, con asignacion de la *cóngrua* conveniente; restituyendo, en caso necesario, al curato en su antigua libertad, si la iglesia ó comunidad, á que estuviese unido, resistiera contribuir al vicario con la cuota ó asignacion que el obispo señalara, con arreglo al cap. 16 de la ses. XXV. Estas disposiciones se hicieron estensivas al territorio de la órden de San Juan, dictándose reglas para la union y supresion de beneficios incóngruos (leyes 3.ª y 4.ª id.).

Dispuesto estaba por resoluciones de 16 de Febrero y 28 de Junio de 1755, que los sugetos, nombrados para curatos, cuyas rentas no pasaran de 300 ducados, contando los frutos ciertos y los inciertos, retuvieran cualquiera otra, que disfrutaran antes de su provision, declarándose así en los despachos; y que se practicara esto mismo con aquellos, á quienes se confirieran prebendas ó beneficios simples, cuyo valor, con frutos ciertos é inciertos, no escediese de 200 ducados (ley 4.ª, tít. 18). Posteriormente, por acuerdo de 10 de Enero de 1795, aprobado á consulta de 18 de Junio de 1804, se mandó observar por punto general (ley 9, tít. 20) en todas las nuevas erecciones y dotaciones de vicarías y curatos, que, cuando las primicias y diezmos de sus respectivos territorios alcanzaran para su dotacion, se completase de ellos la *cóngrua* de los nuevos vicarios, sin computar los derechos de estola.

Como, segun queda expuesto, la cuantía de la cóngrua se dejó siempre á cargo de los obispos, y eran desiguales en cada diócesis, ya los diezmos, primicias y bienes de la Iglesia; ya el coste de la vida, segun la relativa escasez ó abundancia, los precios de las cosas, las circunstancias todas, que, para fijar aquella, debian apreciarse, era, y no podia menos de ser, desigual, y aun por las vicisitudes de los tiempos, vaga su cuantía en cada diócesis. Pendia esta, en sus casos, de los convenios, que mediaban entre la mitra y los *diezmeros mayores*, que á la vez solian ser patronos; y mientras la cóngrua comun era, por algunas sinodales, de cien ducados anuales, en los curatos de señores y patronos diezmeros, subia á 300 y más.

Ordenóse en un principio que, en la cóngrua, no se computasen los emolumentos

eventuales, como el *pié de altar*, el patrimonio y bienes particulares del párroco ó vicario. La necesidad obligó otras veces á ordenar lo contrario, y en España, en los últimos tiempos, se pensó en fijar arancel para el pié de altar, imputando su cuantía en la cóngrua, ya para mejorarla, ya al menos para completarla.

Así llegaron las cosas á la época constitucional, de fines del siglo anterior, y primera mitad del presente en los diversos Estados cristianos de Europa y del mundo, y muy particularmente de España. Suprimidos los diezmos, y convertidos en bienes nacionales los de la Iglesia, se ha seguido una alteracion profunda en el modo de ser del clero. La Iglesia habia sido entre nosotros una *corporacion lícita*, con derecho de adquirir, por tanto. Además habia sido espresamente autorizada para ello por el poder temporal. Habia adquirido, pues, bajo la garantía de la ley, y su propiedad era, por lo menos, tan sagrada como las de los demás ciudadanos. El Estado, en su consecuencia, ejerció un acto de justicia debida, sustituyendo la expropiacion con una asignacion sobre el presupuesto general, por medio de la que se llama ley y presupuesto del *culto* y *clero*, que varió, segun las dificultades de los tiempos, y aun en estos momentos se disputa sobre ello.

Pero sobre el acto de justicia del Estado, habia que hacer todavía algo mas: habia que legalizar la transformacion, el desapropio y sus efectos, para lo cual se necesitaba la concurrencia y acuerdo de otra potestad; y esto se realizó por el solemne Concordato de 1851 y su adicional de 1859. Por ellos se dió *sanacion canónica* á la venta por el Estado, y adquisicion por particulares de bienes eclesiásticos, ahora ya nacionales; se legalizó todo lo practicado, y se fijaron y concordaron las asignaciones del culto y del clero catedral, colegial y parroquial. Así la *cóngrua*, la porcion discrecional, fijada, y segun los medios, los tiempos y las circunstancias, por los obispos, ha quedado sustituida con lo que se llama *dotacion* por el Estado, y en este concepto ha de verse el complemento de este artículo en el especial y de la materia y en los multiplicados artículos correspondientes.

Pero además de la *cóngrua* cardinal y propiamente dicha, hay que hacerse cargo de otra todavía llamada así por asimilacion; es la cóngrua relativa á *capellanías* y beneficios familiares, y no curados.

En los siglos medios, la piedad, la comodidad de las familias, la vocacion sin medios, con otras causas, que es fácil comprender, multiplicaron la ordenacion sin título, ni beneficio, hasta el punto de causar la alarma, que manifiestan las leyes eclesiásticas y seculares, sobre el particular. Así, Inocencio V, en el Concilio general, lateranense 4.°, estatuyó que el obispo, que ordenare al que no tuviese renta fija, y segura, quedase obligado á mantenerlo, hasta que la tuviese. El esceso se contuvo; pero entonces los particulares multiplicaron las fundaciones con renta, de patronato activo ó pasivo familiar, llamado por eso, *de sangre*. Entonces el ordinario, antes de proceder á la ordenacion, examinaba, si la capellanía era cóngrua. Pero los fundadores, querian la perpetuidad: pedian que se declarasen título perpétuo de ordenacion, y de aquí, en virtud de la aprobacion y declaracion del diocesano, las capellanías *colativas*, esto es, conferibles, sin que el obispo quedase sujeto á la pena del lateranense.

Prevaleció en la práctica la declaracion, de que una capellanía se reputaba colativa, y cóngrua por lo tanto, cuando en varias vacantes se habia provisto ó colacionado en tal concepto.

Pero prevaleció á su vez la verdad sobre la doctrina, y la esperiencia demostró que se multiplicaba un clero pobre y poco autorizado, porque la cóngrua de sus capellanías se habia hecho nominal, es decir, que habian renacido los tiempos del concilio de Letran, de lo que dá testimonio el lenguaje de nuestras leyes. Ya por la bula *Apostolûs ministerij* (§. 8) se habia mandado, que las capellanías y beneficios sin renta, fuesen suprimidos, y si solo tuviesen la tercera parte de la cóngrua, se redujesen á legados píos.

Por el concordato de 1737 (art. 6.°), se prohibió la formacion de patrimonios tempo-

rales, ó *ad tempus*; y asimismo, que los perpétuos no escediesen de 60 escudos romanos de renta anual (arts. 4 y 5).

Las leyes recopiladas habian corroborado cuanto dispone el Concilio de Trento, sobre fraudes cometidos en la formacion de patrimonios y capellanías (tít. 12, lib. 10, Nov.), y todavía añadian: «por cuanto la mayor causa de la relajacion del estado eclesiástico secular, y crecido número de eclesiásticos, nace de la multitud de capellanías, que hay en estos reinos, cuyas rentas, por la calamidad de los tiempos, se han atenuado, de modo, que los mas, que se han ordenado, á título de ellas, no pueden vivir con la decencia, que corresponde á su estado...,» consultó el Consejo al Rey, se impetrase un breve de Su Santidad, para que los obispos, cada uno en su diócesis, pudieran unir capellanías incóngruas, formándolas cóngruas, de la union de dos ó mas, fijando estas, segun las circunstancias de cada localidad.

El Concilio de Trento autorizó la formacion de *patrimonios*; pero en la práctica esta facultad se convirtió en abuso, para conseguir ordenacion, verdaderamente sin rentas, y en defecto de capellanía cóngrua: motivo por el que los diocesanos dificultan hoy la tal ordenacion.

Al fin las capellanías colativas *de sangre* fueron suprimidas, por la ley de 19 de Agosto de 1841, si bien rehabilitadas y trasformadas algunas por el reciente y conocido arreglo pontificio de 24 de Junio de 1867 y lo han sido bajo la cóngrua de doscientos escudos, en la forma contenida en dicho arreglo.

CONJETURA. Version de *conjectura*, y esta voz del verbo *conjicio*, en una de sus acepciones, juzgar por deduccion, en vista de un hecho ó suceso. En lo judicial, pues, es conjetura el juicio que se forma sobre la delincuencia que se persigue, fundado en hechos, que se ligan, ó pueden ligarse con ella, por los principios del raciocinio humano. Para que sea fundada la *conjetura*, es necesario que los datos, en que se funde, sean ciertos; como es preciso que sean ordenadas las premisas, para que sea legítima la consecuencia. Por *conjetura*, partiendo de los hechos que nos dá á conocer la esperiencia, llegamos á saber anticipadamente muchas cosas y sucesos, arrancando secretos á la naturaleza y al misterioso porvenir: por *conjetura*, se realizan grandes progresos en las ciencias físicas y exactas: por conjetura hicieron Newton, Lavoisier y Franklin, los portentosos descubrimientos, que han glorificado sus nombres; por *conjetura*, en fin, proceden de ordinario, el médico, el hombre de gobierno, el estadista, el jurisconsulto, y en su caso los tribunales de justicia, al dictar en muchos casos sus sentencias, especialmente en materia criminal.

Sobre este punto, hablamos con la detencion, que su importancia requiere, en los artículos **INDICIOS** y **PRUEBA ADMINICULATIVA**, limitándonos en el presente á encarecer la atencion y sumo estudio, con que, segun el derecho romano, se habian de considerar las *conjeturas* (leyes 23, tít. 19, libro 4.°; 2.°, tít. 65, lib. 7.°; 22, tít. 22, libro 9.° y otras del *Código*), confirmadas en el Theodosiano (ley 7, tít. 36, lib. 2.°), y en el *Digesto* (ley 1.°, tít. 8.°, lib. 48).

Lo mismo autorizan las leyes de Partida (tít. 7.°, Part. 7.°), y, como en lo eclesiástico (Decretales, cap. 2.° y 14, tít. 23, libro 2.°: y cap. 10, tít. 40, libro 5.°), la *conjetura* está admitida, ni podria ser otra cosa, por todos los derechos, y en todas prevalece el axioma canónico: *Adminicula, quæ non prossunt singula, collecta jubant* (decisiones de la Rota, números 1 y 2).

Así nuestra legislacion penal novísima reconoció en los juicios el *criterio racional* (regla 45, de la Ley provisional para la aplicacion del Código); y de todo se desprende, con cuanto esmero y conciencia deben ser escogidos los que han de juzgar, y cuán necesario es en ellos el criterio judicial, y todo lo que en el órden profesional y científico y en el profundo estudio del corazon humano, puede ilustrarlo.

CONJUEZ. Dícese del juez, que simultáneamente y en un mismo proceso, conoce con otro sobre el propio asunto. Llámase tambien *adjunto, y acompañado*. Véanse estos artículos.

CONJUNCION. Version de *conjuntio*, y esta voz de *jungo*, juntar y *cum*. En el derecho espresa mezcla, no por malicia, de dos ó mas cosas, y es una de las formas de la accesion industrial. Véase **ACCESION**.

CONJURACION. Del verbo *juro*, jurar, y la preposicion *cum*, jurar juntamente y, por tanto, dos ó más. En anteriores tiempos los conspiradores, muy señaladamente para grandes crímenes, como los de lesa majestad ó lesa nacion, se ligaban y fortificaban entre sí con formidables y aun horribles juramentos. Los que así formaban conspiracion se llamaban conjurados. Siempre esta voz ha sido de terror, en medio de que no anuncia un delito aislado; sino en conjunto con la conspiracion, ó una conspiracion jurada para grandes crímenes. Entonces, como ahora, agravaba el delito de conspiracion, ó la conspiracion para el delito. Hoy por el Código penal no puede constituir sino circunstancia agravante. Véase **CONSPIRACION**.

CONMINACION, CONMINATORIO. Del verbo latino *comminor*, amenazar. Amenázase, á veces, para el mal, en vias de delincuencia. En lo judicial, y administrativo, claro es que no puede ser así: como fórmula de procedimiento se amenaza por el juzgador, ó por otra autoridad, para prevenir la delincuencia, por el temor saludable de la ley, y de la pena. Es, pues, conminacion, en estos casos, el apercibimiento, con que la autoridad judicial, ú otra de distinto órden, procura el cumplimiento de lo que ordena, con la amenaza de una correccion ó castigo, autorizado por las leyes, y dícese *conminatorio* el mandamiento que contiene esta prevencion. Véase la conminacion en lo civil y criminal. En lo civil, por ejemplo, cuando, habiéndose mostrado parte en los autos el demandado, no los tomaba para contestar la demanda, en cuyo caso se le conminaba con tenerla por contestada, si no lo verificaba. En los juicios ejecutivos á veces, bien por que el juez dudase si los documentos presentados traian, ó no, aparejada ejecucion, bien con el fin de dar algun respiro al deudor para que pagase, solia fijársele un término breve, conminándole con la ejecucion, si dentro de él no solventaba la deuda. En los juicios sumarísimos de despojo y en los de desahucio era constante la práctica de conminar al despojador, en los primeros, con la exaccion de una multa, si no se abstenia en lo sucesivo de perturbar ó molestar al despojado en su posesion; y en los segundos, se prevenia al inquilino ó arrendatario, que dejase libre y á disposicion de su dueño la casa ó heredad, dentro, del término que se les habia prefijado, conminándoles en otro caso con ser lanzados de la finca.

Segun la ley de Enjuiciamiento civil, si bien la conminacion no procede en el trámite que hemos mencionado del juicio ordinario, puesto que, trascurrido el término del emplazamiento, sin haber comparecido el demandado, citado en su persona, ó en la de su mujer, hijos ó parientes, y acusada una rebeldía, por ministerio de la ley se dá por contestada la demanda; como tambien en el caso de que, habiéndosele entregado los autos para contestarla, no lo verifica dentro del término legal (art. 232, 251 y 252); ni en el juicio ejecutivo, en el que el juez, examinado el título que se le presente, despachará ó denegará la ejecucion, sin prestar audiencia nunca al demandado (id. 946); procede y está autorizada en otros muchos casos. Así, al tratar de la absolucion de posiciones, expresa dicha ley: «Las contestaciones deberán ser afirmativas ó negativas, pudiendo agregar el que las dé las esplicaciones que estime convenientes, ó las que el juez le pida. Si se negare á declarar, el juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso, si persiste en su negativa. Si las respuestas fuesen evasivas, el juez le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos, respecto á los cuales sus respuestas no fuesen categóricas y terminantes» (id. 295). En el juicio de desaucio previene el artículo 645 que, «si el demandado, que estuviere en el lugar del juicio, no compareciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma forma para el dia inmediato, apercibiéndole, al practicar esta diligencia, si fuese habido, y si no, en la cédula que se le deje con que de no concurrir al juicio

se le tendrá por conforme con el desaucio, y se procederá, sin mas citarlo ni oirlo, á desalojarlo de la finca.» Y el 646 que, «si no compareciere el presente en el lugar del juicio, despues de la segunda citacion; ni el ausente, despues de la primera, el juez declarará inmediatamente haber lugar al desaucio, apercibiendo de lanzamiento al demandado, si no desaloja la finca, dentro de los términos que á continuacion se espresan.» En el interdicto de recobrar, se ordena asi bien: «Decretada la restitucion, se verificará inmediatamente, haciendo al que resulte despojante las prevenciones y apercibimientos correspondientes» (art. 727), y en el de obra nueva dice el 743: «Si se ratificare la suspension de la obra, se procederá á ejecutarla ante escribano, por alguacil que se comisione al efecto, estendiéndose en los autos la oportuna diligencia del estado, altura y circunstancias de la obra, y apercibiendo al que la estuviere ejecutando con la demolicion á su costa, de lo que de allí en adelante se edificare.» El conminado ó apercibido, si desobedece el precepto á cuyo cumplimiento se le compele con la amenaza, incurre, ó no, desde luego, segun los términos del apercibimiento, en la responsabilidad pecuniaria, ó de otro género, que le fué intimada con el mandamiento conminatorio.

En los negocios criminales estaba admitido, y era muy usual en el antiguo procedimiento, conminar al reo, á quien se imponia una pena en definitiva, con agravar esta en el caso de reincidir ó delinquir nuevamente. Se comprende y esplica la aplicacion de este medio coercitivo, cuando la penalidad, y las circunstancias que la agravaban ó atenuaban, habian venido á ser arbitrarias y discrecionales, sin mas tasa ni medida, en la generalidad de los casos, que la prudencia de los tribunales; pero es inadmisible hoy, cuando rige un Código, que clasifica y determina los delitos y las penas, así como las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad criminal. Mas esta precision rigorosa, en la aplicacion de las prescripciones del Código penal, no priva á los jueces y tribunales de la facultad de corregir, amonestar ó conminar á sus respectivos subordinados, y aun á los que sin este carácter intervienen en los juicios desempeñando las funciones propias de algun cargo especial.

CONMISTION. Mezcla, y tal vez confusion de cosas de dos ó mas dueños. Puede ser lo que llamamos *confusion*, y es entonces uno de los casos de *accesion*, y por tanto uno de los modos de adquirir.

CONMUTACION. En el órden penal, la sustitucion de una pena menor en lugar de otra mayor. La facultad de hacerlo es parte de la de indultar, ó sea de la *prerogativa de gracia*, concedida por nuestras leyes antiguas, y Constituciones políticas, al Soberano. Es parte de la facultad de indultar, porque en la conmutacion hay realmente indulto, pues queda indultado, ó remitido el esceso de pena, que media entre la menor y la mayor.

En el lenguaje de las leyes recopiladas, la facultad de conmutar correspondia tambien á los tribunales (leyes 1.ª, 2.ª, 3.ª, 6.ª y 10, y nota 1.ª, tít. 40, lib. 12, Nov.). La ley 21, tit. 41, decia: «Y tambien los tribunales superiores podrán *conmutar* las penas de presidio en pecuniarias, permitiéndolo la clase del delito, etc.» Así algunos autores han podido decir que, además del Rey, podian conmutar los tribunales. Pero el lenguaje de las leyes era inexacto, y propio de un sistema penal vicioso, por no fijo, é inflexible, como el establecido por la moderna codificacion penal. Mas todavia en aquellos tiempos hay que advertir que lo que habia en realidad, todo debidamente analizado, es que el legislador, al dar tal encargo á los tribunales, alteraba, con su suprema autoridad, el sistema penal, estableciendo penas alternativas, que impondrian los tribunales, segun su prudencia, y la naturaleza del caso; en cuyo supuesto los tribunales, no *conmutaban*; sino que, segun el mandato, y en todo caso en comision del legislador y sumo imperante, imponian, *sentenciando*, la pena alternativa. Así es que, una vez impuesta una de las dos penas, por sentencia firme, no podian conmutarla, esto es, sustituirla por la otra, lo que únicamente podia hacer ya el Soberano.

Un caso habia, en que parecia realmente que los jueces y tribunales conmutaban; y era cuando podian sustituir unas penas á otras, en los autos de visita; pero debe notarse que entonces lo verificaban por comision del Poder ejecutivo, en quien únicamente residia la facultad de indultar.

Como quiera que sea, cualquier práctica, mas ó menos anómala, que se note, en aquel estado de la legislacion, en que habia penas *extraordinarias*, un sistema penal poco preciso, y comisiones de sustitucion de penas, como las que quedan mencionadas, no puede invocarse y sostenerse, cuando tenemos, como sucede, un sistema penal fijo, que nadie puede ni debe alterar, y la correspondiente division y diferencia de funciones de los tribunales y del poder soberano.

No está, ciertamente, organizada todavía entre nosotros, la *prerogativa de gracia*; pero están deslindadas las atribuciones, y atribuida, fija, y esclusivamente la facultad de indultar, de que es parte esencial la de conmutar. Alguna vez podrá delegar la aplicacion el Soberano; pero es él el que indulta, ó conmuta.

La pena conmutada ha de haber sido impuesta por sentencia firme, porque la sustituida ha de ser inferior á la conmutada, lo cual solo puede saberse y conocerse en dicho caso.

Hay quien opina, al hablar de la prerogativa de gracia, que no debe ser parte de ella la de conmutar, porque así el que indulta impone una pena, lo cual es atribucion esclusiva de los tribunales; pero seria una teoría insostenible, porque esa es una consecuencia inseparable del indulto del exceso de la pena mayor. Seria además una teoría inconveniente; pues no siempre puede, ni debe concederse indulto completo de la pena pincipal; ni la atenuacion seria siempre, como debe, acomodada á las circunstancias complejas del caso, esto es, del delito y de la persona, por su sexo y calidad, del estado de la legislacion, y de la civilizacion del país y de la época.

La conmutacion es por lo comun pedida por la parte; y tambien concedida sin peticion; pero entonces el penado tiene la facultad de no aceptarla, pues él solo puede juzgar si le conviene.

Conmutada la pena, lo es con todas sus accesorias, si otra cosa no se previene, ó lo determina la legislacion.

La conmutacion ha de ser siempre sin perjuicio de tercero; porque entonces el indulto del culpable era pena para el inocente (ley 3, tít. 42, lib. 12, Nov.).

La pena conmutada se entiende con sus accesorias, si otra cosa no se espresa; y puede expresarse, porque la facultad de indultar, que podria estenderse á toda la pena, puede ciertamente limitarse á una parte.

Hay casos, en fin, aun en el dia, en que parece que los tribunales indultan; cual sucede por el Código penal, cuando el tribunal impone una pena pecuniaria, sustituible por una corporal, de prision, por tiempo limitado; pero entonces, ha sido el legislador, y ha sido la ley la que ha ordenado la pena alternativa y sustitucion, y el tribunal no hace mas que aplicar la ley, sin arbitrio para otra cosa.

CONMUTACION (EN LO CANÓNICO). Lo mismo que en lo civil, es sustituir una cosa en lugar de otra. Puede hacer la conmutacion el que tiene facultad para dispensarla en virtud de su jurisdiccion ordinaria ó delegada, segun la regla de derecho: *qui potest quod est plus, utique quod est minus*; porque la dispensa estingue la obligacion, mientras que la conmutacion la deja subsistente, cambiando solo la materia ó la forma, en que se ha de cumplir.

La conmutacion tiene lugar mas frecuentemente respecto de los votos, promesas, y legados piadosos. Hemos dicho que por la regla general, todo el que se halla revestido de facultades para dispensar un voto, puede conmutarlo. De esta facultad carece el confesor; escepto cuando el obispo lo autoriza; y á su vez los obispos no pueden conmutar, sin licencia de la Santa Sede, los votos *reservados*, mas bien por costumbre que por derecho, en sentir de algunos, al Sumo Pontífice, cuales son los de castidad perpétua, de religion y de las tres peregrinaciones á Santiago de Galicia,

á Jerusalen y al sepulcro de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, en Roma.

Los confesores, con autorizacion de sus legítimos superiores, es decir, del obispo y á veces del prelado regular de la órden, á que pertenezcan aquellos, pueden ordinariamente, conforme á las bulas del jubileo, conmutar todos los votos, en obras piadosas, escepto los de religion y castidad perpétua, total ó absoluta.

Son causas legítimas de conmutacion una dificultad grave para realizar el voto, la irreflexion ó ligereza con que se hizo, y el temor fundado de que se viole ó no se cumpla, sino conmutándolo.

Acerca de la conmutacion de las últimas voluntades y legados piadosos, decretó el Concilio de Trento: «Conozcan los obispos sumaria y extrajudicialmente, como delegados de la Sede Apostólica, de las conmutaciones de las últimas voluntades, las que no se efectuarán sin justa y necesaria causa; ni se pasará á ponerlas en ejecucion, sin que primero les conste que no se expuso en las preces ninguna cosa falsa, ni se ocultó la verdad.» (Ses. XXII, cap. 6.° *De reformat*). En el *discurso* para esta sesion y la XXV, capítulo 4.°, de que luego hablaremos, se presentó la duda de si, para dichas conmutaciones, se requieren copulativa ó disyuntivamente la necesidad y justicia, pareciendo lo mas probable esto último.

La conmutacion se ha de verificar, no por leves causas; sino cuando, por la insuficiencia de lo que se asigna ó por otros motivos, no puede la última voluntad surtir efecto en aquella obra, que el testador quiso que se realizara; en cuyo caso, no caduca ni se hace ineficaz su piadosa intencion, sino que en realidad se cumple, variándose únicamente la forma ó materia, cuya decision compete al obispo. Solo el romano Pontífice puede conmutar las obras y disposiciones ó legados piadosos. Así suele suceder, por ejemplo, que las dotes mandadas distribuir entre doncellas pobres, se adjudican por concesion pontificia á alguna parienta necesitada del testador; y en esto se diferencia las facultades del Pontífice y del obispo, el cual obra solo como juez en las cosas de justicia, mientras el Pontífice lo hace como príncipe supremo en los asuntos de gracia.

Con respecto á las misas, que el testador manda en sufragio de su alma, ó por las de otros, solía ocurrir y ocurre algunas veces, que, ó bien por su gran número, no se pueden decir todas en los dias é iglesias señalados; ó bien, por lo escaso de estipendio, no se encuentran sacerdotes que las digan; y en ambos casos puede quedar sin cumplimiento la última voluntad del finado, ó gravada la conciencia de las personas, que tienen el encargo de cumplirla. A fin de evitar estos inconvenientes, el Concilio de Trento dió facultades á los obispos» para, que en su sínodo diocesano, así como á los abades y generales de las órdenes religiosas en sus capítulos generales, puedan, tomando préviamente informes exactos sobre el asunto, determinar, segun su conciencia, respecto de las iglesias que conocieren tener necesidad de esta resolucion, cuanto les pareciere mas conveniente al honor y culto de Dios y á la utilidad de las iglesias; con la circunstancia, no obstante, de que siempre se haga conmemoracion de los difuntos, que destinaron aquellos legados á usos píos por la salvacion de sus almas» (Sess. XXV, cap. 4.° *de reforma*). En este caso, pues, se limita la conmutacion al número de misas, que se pueden celebrar, quedando íntegra la intencion, y cumpliéndose, por consiguiente, en la única forma posible, la última voluntad del testador.

Este decreto, en la práctica es estensivo á la reduccion de los sufragios y aniversarios por el alma de los difuntos. Y apoyándose en el mismo, opinó, en 3 de Marzo de 1597, la congregacion del Concilio, que no es lícito al obispo reducir las cargas de misas del beneficio, impuestas en la fundacion; declarando igualmente, por otro dictámen, de 8 de Junio de 1600, que las rentas, dejadas por la voluntad piadosa de los testadores, para celebracion de misas y para otros objetos píos, no pueden ser convertidas por el obispo en distribuciones cotidianas, ni en ningun otro uso, aunque sea muy piadoso tambien.

Por último, es de notar el siguiente párrafo

del *Discurso*, para las ses. XXII, cap. 6.° y XXV, cap. 4.° *de reforma*, antes citado: «Habiéndose introducido una gran facilidad (en la conmutacion ó reduccion del número de misas) produciendo considerables abusos; por lo tanto, esta sagrada congregacion del Concilio, por los decretos que espidió, desde el año 1625, que vulgarmente se llaman *de la celebracion de misas*, robustecidos con la autoridad pontificia de Urbano VIII, quitó esta facultad; por cuyo motivo se la reservó á la misma congregacion, la que suele concederlo, despues de haber oido al obispo ó al prelado regular, y reconocido el estado de la iglesia, interponiendo con prudencia su arbitrio, atendida la diversidad de los lugares.»

Cuando, material ó legalmente, es imposible cumplir el legado, en la forma ó para el uso prescrito por el testador, puede el obispo, de acuerdo con el heredero ó ejecutor de la última voluntad del difunto, conmutarlo en otro objeto piadoso; mas esta conmutacion no ha de hacerse, aunque sea destinando el legado á un uso, que parezca ó sea mejor, ni aunque en ello consienta el heredero ó testamentario; sino en virtud de una causa necesaria y justa. Igual facultad para conmutar, mediante la misma causa, corresponde á los patriarcas, primados y arzobispos; mas no respecto de los legados píos de las personas, que murieron siendo súbditos de sus respectivos sufragáneos, á no ser en virtud de apelacion á aquellos en causas sobre cumplimiento de alguna disposicion testamentaria.

Los canonistas suelen establecer, por regla general, cuatro causas legítimas de tales conmutaciones, á saber: la necesidad, la utilidad, la piedad y la incomodidad, ó la mayor comodidad, cuyas causas dividen Barbosa, La Croix, Moneta, Ferraris y otros en varias especies, declarando que, si el dinero legado no basta para el uso, á que lo destinó el testador, puede el obispo aplicarlo á otro objeto piadoso, y si la manda no puede cumplirse por impedimento material ó legal, tiene el prelado facultad para conmutarla en otro destino: si es imposible construir la iglesia ó monasterio, en el lugar que el testador dispusiere, con el dinero destinado al efecto, puede el obispo disponer que se edifique en otra parte: si el legado fuera para un solo objeto, y este no se considerase necesario, como por ejemplo, para pintar una iglesia que amenazara ruina, puede el obispo destinar los fondos á otra cosa mas conveniente para la misma iglesia. Tambien puede conmutar la última voluntad del difunto, sin prévia consulta al romano Pontífice, en el caso de necesidad urgente: y si la iglesia se halla necesitada de sagrados ornamentos ó vestiduras, puede el obispo, de acuerdo, y con el consentimiento del heredero, hacer la conmutacion por una sola vez, empleando en tales objetos la suma legada para celebracion de misas en la iglesia ó en alguna capilla (Ferraris, *Biblioth*, art. LEGATARIUS, LEGATUM, n. 157 á 164.)

Pero ya hemos indicado que no debe interpretarse latamente esta facultad del obispo. El cual, aparte las doctrinas y opiniones, que dejamos espuestas, no puede conmutar el legado cuantioso, que para celebracion de misas se establece al constituir una capellanía. Así lo disponen la congregacion del Concilio, por sus decretos de 7 de Diciembre de 1697, 9 de Agosto de 1698 y 4 de Setiembre de 1702, además del decreto de la Rota romana, de 20 de Enero de 1708, declarando, que los legados, en general para celebracion de misas, *nunquam patiantur diminutionem*.

CONNIVENCIA. Del verbo *conniveo*, hacer la vista larga, disimular lo que el connivente debia reprender, evitar, corregir. En este concepto induce responsabilidad, que podria tomar la forma de complicidad, y aun la responsabilidad de autor, si el hecho justiciable no se hubiera podido verificar sin la connivencia, lo que se determinará por las circunstancias del caso.

CONOSCENCIA. Por las leyes de Partida lo mismo que confesion judicial, ó extrajudicial, en cuyos artículos ha de verse (libro 15, Part. 3.ª).

CONOCER, CONOCIMIENTO. Del verbo *cognosco*. Ambas voces tienen variada, é importante significacion y y aplicaciones, ya *psicológicas*, ya morales,

ya jurídicas, que espondrémos. *Conocer*, sicológicamente espresa el ejercicio normal de la facultad del alma, que se llama *entendimiento*, y en recordando que el hombre es *sujeto de derecho*, á diferencia de los demás séres no racionales; que merece y desmerece; que le son ó no imputables sus acciones, por el entendimiento y libre albedrío, se conoce cuál es la importancia del, al aparecer, sencillo objeto del presente artículo, en el órden *psicológico*; y por ello en el moral y jurídico.

Conocimiento, en el órden filosófico, espresa la misma idea que *conocer*: en este órden el que conoce, tiene conocimiento; el que tiene conocimiento, conoce; ambas voces espresan el ejercicio normal del entendimiento y de la voluntad; aquella situacion moral, en que el hombre merece ó desmerece, en que se hace digno de premio ó de castigo: situacion, que por eso ha merecido y merece tan esquisita consideracion al legislador, que tan diversamente estatuye y sanciona, si el hombre, de cuyas acciones se trata, está ó no está en pleno conocimiento, ó sea, tomando el efecto por la causa y la causa por el efecto, *en su cabal juicio y entendimiento*; y si en su caso, el estado negativo es voluntario. En el caso opuesto el hombre no es responsable, moral ni criminalmente; aunque puede serlo civilmente por accion de daños, como sucede en los causados por un impúber, por un demente, por un imbécil: pero siendo mas ó menos voluntaria la perturbacion, á lo menos *en la causa*, el hombre es responsable en la misma proporcion; y este es el caso, que con esquisito, filosófico y jurídico criterio, deben discernir el legislador y el juzgador.

La índole científica de la cuestion hace que los tribunales recurran en su caso, al criterio profesional, para averiguar y saber si el sugeto, al practicar el acto de que se trata, se hallaba ó no en pleno conocimiento, y las leyes tienen determinado el modo de practicarlo y el valor legal del dictámen facultativo. A veces se recurre tambien al criterio comun, cual sucede en las últimas voluntades, en que el actuario da fé de que el testador se hallaba en su cabal juicio y entendimiento, esto es, que tenia normal conocimiento de lo que hacia.

Por lo expuesto se comprenderán la significacion técnica y aplicacion de las voces conocer y conocimiento, empleadas en lo judicial. Conocer y proceder, tomar un juez conocimiento, estar conociendo en alguna causa, espresan la facultad y el hecho de juzgar, de aplicar la facultad jurisdiccional, que constituye el carácter de un juez ó tribunal.

En las contiendas de competencia, en las inhibitorias y declinatorias, son fórmulas técnicas que el conocimiento de la causa corresponda ó no á tal juez ó tribunal, que tal juez se inhiba del conocimiento, etc., etc.

En lo antiguo se llamaba, y en algunas partes se llama aun *conocimiento*, el vale reconocido y el reconocimiento del mismo; siendo mas exacta esta última voz, pues hubo un conocimiento de la obligacion al firmarla ó contraerla, y otro ahora al reconocerla.

En el curso, en fin, de letras de cambio se espresa por conocimiento la identificacion de la persona que se presenta á cobrar la letra. Si no es conocida del pagador, se le exije *conocimiento*, esto es, persona que, siendo conocida del pagador, diga conocer al que ha de cobrar, como espresamos en su artículo.

CONOCIMIENTO (EN LO MERCANTIL). En el comercio marítimo se llama *conocimiento*, la nota ó relacion espresiva de las mercancías que se cargan. Suele estar impresa, con los claros correspondientes, que se llenan en cada carga ó viaje, y por tanto, y ya por la práctica, se estiende en papel simple. Este documento se llama tambien *póliza de cargamento*; que no ha de confundirse con la *póliza de fletamento*, que tambien se llama *carta-partida*, y es el documento en que se consignan el flete y condiciones del trasporte, ó sea el precio del alquiler de la nave.

El *conocimiento* ha de estar firmado por el que dá, y por el que recibe para trasportar, esto es, por el cargador y el capitan del buque, y, como base y comprobante de todos los derechos, y de todas las responsabilidades, se estenderán y entregarán tantos ejemplares, como son las personas interesadas en la operacion; y por tanto, al cargador, capitan.

naviero y consignatario, ó consignatarios, si fueran mas de uno, como con frecuencia sucede, cuando es mas de uno tambien el punto de descarga. El Código de comercio consigna y explana con precision las circunstancias del conocimiento y las cuestiones que pueden ocurir, en los artículos siguientes, á que agregamos las correspondencias de los de Códigos estranjeros.

»Art. 799. El cargador y el capitan de la nave, que recibe la carga, no pueden rehusar entregarse mútuamente, como título de sus obligaciones y derechos, un *conocimiento* en que se espresará:

1.° El nombre, matrícula y porte del buque:

2.° El del capitan y el pueblo de su domicilio:

3.° El puerto de la carga y el de la descarga:

4.° Los nombres del cargador y del consignatario:

5.° La calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías:

6.° El flete y la carga contratadas.

Puede omitirse la designacion del consignatario, y ponerse á la órden (art. 281, C.° Fr.: 507 y 508, C. de Hol.: 1553 y 1554, C. de Port.).

»Art. 800. El cargador firmará un conocimiento, que entregará al capitan.

El capitan firmará tantos, cuantos exija el cargador.

Todos los conocimientos, ya sea el que debe firmar el cargador, como los que se exijan al capitan, serán de un mismo tenor, llevarán igual fecha, y espresarán el número de los que se han firmado (art. 282, C. Fr.: 509 y 510, C. Hol.: 1555, C. Port.).

»Art. 801. Hallándose discordancia entre los conocimientos de un mismo cargamento, se estará al contesto del que presente el capitan, estando todo escrito en su totalidad, ó al menos en la principal, que no sea letra impresa, de mano del cargador, ó del dependiente propuesto para las espediciones de su tráfico, sin enmienda ni raspadura; y por el que produzca el cargador, si estuviere firmado de mano del mismo capitan.

Si los dos conocimientos discordes tuviesen respectivamente este requisito, se estará á lo que prueben las partes (art. 284, C. Fr.: 515, C. Hol: 1561, C. Port.).

»Art. 802. Los conocimientos á la órden se pueden ceder por endoso y negociarse.

En virtud del endoso, se trasfieren á la persona, en cuyo favor se hacen, todos los derechos y acciones del endosante, sobre el cargamento.

»Art. 803. El portador legítimo de un conocimiento á la órden debe presentarlo al capitan del buque, ántes de darse principio á la descarga, para que se le entreguen directamente las mercaderías; y, omitiendo hacerlo, serán de su cuenta los gastos que se causen en almacenarlas, y la comision de medio por ciento, á que tendrá derecho el depositario de ellas.

»Art. 804. Sea que el conocimiento esté dado á la órden, ó que se haya estendido en favor de persona determinada, no puede variarse el destino de las mercaderías, sin que el cargador devuelva al capitan todos los conocimientos que éste firmó; y, si el capitan consintiere en ello, quedará responsable del cargamento al portador legítimo de los conocimientos.

»Art. 805. Si por causa de estravío no pudiere hacerse la devolucion, prevenida en el artículo anterior, se afianzará á satisfaccion del capitan el valor del cargamento; y sin este requisito, no se le podrá obligar á suscribir nuevos conocimientos para distinta consignacion.

»Art. 806. Falleciendo el capitan de una nave, ó cesando en su oficio por cualquier otro accidente, ántes de haberse hecho á la vela, exigirán los cargadores de su sucesor que revalide los conocimientos, suscritos por el que recibió la carga, sin lo cual no responderá aquel, sino de lo que se justifique por el cargador que existia en la nave, cuando entró á ejercer su empleo. Los gastos que puedan ocurrir en el reconocimiento de la carga embarcada, serán de cuenta del naviero, sin perjuicio de que los repita del capitan cesante, si dejó de serlo por culpa, que hubiere dado lugar á su remocion.

»Art. 807. Los conocimientos, cuya firma sea reconocida legítima por el mismo, que las suscribió, tienen fuerza ejecutiva en juicio.

»Art. 808. No se admitirá á los capitanes la escepcion de que firmaron los conocimientos confidencialmente y bajo promesa de que se les entregaria la carga, consignada en ellos.

»Art. 809. Todas las demandas, entre cargador y capitan, se han de apoyar necesariamente en el conocimiento de la carga, entregada á éste, sin cuya presentacion no se les dará curso.

»Art. 110. En virtud del conocimiento del cargamento, se tienen por cancelados los recibos provisionales de fecha anterior, que se hubieren dado por el capitan á sus subalternos, de las entregas parciales que se les hubiesen ido haciendo del cargamento.

»Art. 111. Al hacer la entrega del cargamento, se devolverán al capitan los conocimientos, que firmó, ó al menos uno de sus ejemplares, en que se pondrá el recibo de los que hubiere entregado. El consignatario que fuere moroso en dar este conocimiento, responderá al capitan de los perjuicios, que se le sigan por la dilacion» (art. 285, C. Fr).

Supuesta la obligacion del capitan á entregar religiosamente y sin demora la carga al consignatario, puede suceder que éste, á la llegada del buque, haya fallecido ó no se halle en el punto de descarga. El art. 674 dispone para en ese caso, que «cuando por ausencia del consignatario, ó por no presentarse portador legítimo de los conocimientos á la órden, ignorára el capitan, á quién haya de hacer legítimamente la entrega del cargamento, lo pondrá á disposicion del tribunal de comercio, y en defecto de haberlo, de la autoridad judicial local, para que provea lo conveniente á su depósito, conservacion y seguridad.»

Por el derecho comun, y por regla general, no se despacha ejecucion, como es sabido, sino por *cantidad líquida*; y sin embargo, vemos que, segun el art. 807, procede aquella contra el capitan, por las mercancías, espresadas en el conocimiento, lo que se comprende estar fundado en la necesidad de dar espedicion á las operaciones de comercio; siendo notable, el tenor del art. 808, con cuya ocasion, como opinan fundadamente los comentadores. La Serna y otros, no tiene lugar en estos casos, la conocida escepcion del derecho comun, *non numeratæ pecuniæ*.

Algunos creen poder deducir del tenor del art. 799, que la obligacion de firmar y dar conocimiento, en el caso que espresa, es solo potestativa. Y es la verdad, que ni el tenor del artículo puede ser mas terminante; ni la naturaleza de la operacion, y de las recíprocas obligaciones, permitiria otra cosa. Llégase á esto, que cualquier otro género de seguridad recíproca, que se adoptara por las partes, sería *conocimiento*; y establecida terminantemente por el Código la formalidad, que así se llama, las partes no tendrian que quejarse sino de sí mismas, de haber menospreciado sus prescripciones terminantes.

Ha dado lugar á la duda el art. 739 del Código, segun el que, «si se llegase á recibir el cargamento, no obstante que se hubiere solemnizado, en la forma debida, el contrato de fletamento, se entenderá este celebrado con arreglo á lo que resulte del *conocimiento*, cuyo documento será el único, por donde se fijarán los derechos y obligaciones del naviero, del capitan y del fletador, en órden á la carga» (art. 285, C. Fr.); pero bien se vé que aquí se trata de la póliza de fletamento; no de la de cargamento, ó sea del conocimiento, cuya importancia se corrobora. Una cosa sí es cierta, y es que, como las fórmulas legales son por la verdad, y no la verdad por las fórmulas, la de conocimiento no cohonestará nunca el fraude; y que en todo caso, contra su insuficiencia ú omision, contra el dolo ó la necesidad legal, se admitirán toda clase de pruebas. El presente artículo, tiene su complemento, en los demás que se conexionan con él, en el comercio marítimo.

CONQUISTA. Del verbo *conquiro*, procurar con esquisita diligencia. Como se vé, la voz no responde en los tiempos subsiguientes á su etimología; y antes tiene mayor amplitud y gravedad. Es la adquisicion de dominios por medio de la guerra; así como la reconquista es el recobro de dominios perdidos

por el mismo medio. Se comprende bien que la conquista y reconquista son justas, cuando lo es la guerra; y que le son aplicables todas las reglas y principios de derecho de gentes que á esta. Véase, pues, GUERRA.

CONSAGRACION, CONSAGRAR. No vamos á tratar de la consagracion en sus fines y pormenores místicos, lo que no es objeto de la ENCICLOPEDIA; sino en su concepto jurídico, en cuanto procede, ó ha procedido de la ley, por uno y otro derecho, en su origen, en sus medios, y en sus fines sociales, de elevar á la mas alta consideracion de los gobernados, lo que así lo merece, sirviendo aquí á nuestro propósito la historia y la razon etimológica.

Consagracion es version de *consecratio*, y esta voz del verbo *consecrare*, que, como el verbo simple *sacrare*, significaron originariamente *dedicar*. Cuando una cosa ó persona era dedicada, con ritos y solemnidades, con sanciones ó penas, de órden civil ó religioso, ó de ambos, y por tanto por autoridad pública, siempre, cuando así, decimos, era dedicada una cosa ó persona al culto, servicio ú honor de los dioses superiores (*diis superis*), la dedicacion, por la estructura del verbo, se llamó *consecratio*, que espresaba la accion y efecto de hacer una cosa sagrada. Tal era la de consagrar las aras, los templos y los Pontífices Máximos. Lo propio, si la dedicacion de personas se hacia al mas alto honor, de respeto y bien social, mediante sanciones penales de primera gravedad, cual se verificaba en la consagracion de los Emperadores. Así, *sacrare* y *consecrare*, *sacratio* y *consecratio* espresaban, como traducidos despues, y cual queda dicho, el acto solemne de hacer una cosa sagrada, esto es, de elevarla del concepto humano á un concepto supremo, divino ó casi divino.

Las autoridades públicas que podian así realzar y trasformar las cosas y personas, eran los Pontífices Máximos y los Emperadores. Si las cosas ó personas no eran dedicadas á los dioses superiores, sino á los inferiores, en vez de sagradas, se llamaban *sanctæ* (luego traducido santas); si en lo religioso la sancion ó penalidad era la cólera de los dioses, y en lo humano la pena de muerte. De este último modo eran *santos* los muros y puertas de la ciudad, y por las razones antes espuestas, se decian *inviolables* y *sagradas*, las personas de los Pontífices Máximos, de los Emperadores, embajadores, legados y parlamentarios. Justiniano llamaba á su primer código, *Institutiones sacratisimæ*.

Estendido el cristianismo, la consagracion, en el órden religioso, ha variado esencialmente en sus fines y sanciones, en lo que vá, de un Dios verdadero y su culto, á los dioses ficticios con el suyo; si bien conservando en la enunciacion, la analogía etimológica y algunas otras en las formas.

Como entonces, la consagracion ha de proceder, no solo de autoridad pública; sino suprema, pues solo así serán imponentes, cuanto puedan serlo, las sanciones penales; y tales la autoridad de los cánones y las leyes, la del Sumo Pontífice y la de la Iglesia, la de los Reyes y legisladores seculares.

Así se corresponden y sustituyen, á veces, lo *inviolable*, lo *santo* y lo *sagrado*.

La consagracion, en fin, es estensiva tambien á cosas y personas; y así decimos sagrado nombre de Dios, sagrada Biblia, sagrados cánones, el sagrado del templo, vasos y vestiduras sagradas; y nuestras Constituciones políticas han dicho, que *la persona del Rey es sagrada é inviolable*.

Las disposiciones canónicas han determinado los ritos de los multiplicados casos de consagracion, adoptando, en general; salvo en la consagracion eucarística, y mas ó menos diversificada, la antigua *uncion* de los Reyes y Profetas de la ley hebrea, lo que liga este artículo á los de CRISMA: ÓLEO: UNCION. Véanse, sobre los multiplicados casos, las distinciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª del *Decreto*; y las Decretales, lib. 1.º, tit. 15, *De sacra unctione*.

Véanse además los artículos especiales que subsiguen.

CONSAGRACION DE ARZOBISPOS. Es lo mismo que la de los obispos, salvo que, si por delegacion pontificia no se ordena otra cosa, ha de verificarse

en la provincia, ó sea en el arzobispado; concurriendo, además de los tres obispos necesarios, todos los sufragáneos; si bien en el dia basta una comunicacion atenta de exculpacion. Hay por lo demás la diferencia esencial de que el arzobispo, aun consagrado, no puede ejercer funcion alguna episcopal, esto es, ni de la potestad de jurisdiccion, ni de la de órden, mientras no haya recibido el *palio* (cap. *Quia.*, dist. 64: art. 1.°, dist. 66). Véase **ARZOBISPO**: **PALIO.**

CONSAGRACION DE IGLESIAS. Es la dedicacion mas solemne, que practica la Iglesia, para hacer sagrado un edificio, construido, ó destinado para templo. Se emplea raras veces; y basta en la mayor parte de los casos, la bendicion, dada tambien segun rito. No por eso deja de reputarse el templo, bendecido solamente, lugar sagrado; y si, por no haber otro, y aun cuando lo haya, si es señalado por la autoridad competente, como lugar de asilo, en él tomarán sagrado válidamente los reos para los efectos legales.

En la iglesia bendecida, no hay mas signo de que lo está, que el verla destinada en forma al culto católico: las consagradas se distinguen por las cruces rojas, de brazos iguales, que por su interior ostentan sus muros. Bendecir puede un simple presbítero; consagrar solo el obispo.

Bendícese, ó conságrase un nuevo templo, para el mayor respeto, y para realzarlo sobre los edificios profanos y hacerlo lugar *santo* é inviolable por su destino y significacion religiosa, y por las penas canónicas y civiles, en que incurren los que lo profanen.

El Pontifical romano, y los cánones á su vez, determinan los ritos y solemnidades de la bendicion y consagracion. Aquí diremos solo, que la consagracion puede hacerse en dia festivo ó no festivo; y que de la larga ceremonia y solemnidad de la misma, es parte el ungir el obispo con crisma sagrado los muros interiores, sobre doce cruces rojas, de brazos iguales, pintadas préviamente, á doce piés de elevacion del pavimento, y las cuales quedan como testimonio permanente de que la iglesia está consagrada.

Los cánones prohiben que se consagre una iglesia, que no esté dotada.

Despues de ungir los muros, se celebra misa solemne, en testimonio de que aquel es ya templo sagrado (Pontifical romano: dist. 1.ª del Decreto: tít. 40, lib. 3.° de las Decretales).

Las leyes de Partida corroboran las disposiciones canónicas (leyes 13, 14 y 15, tít. 10, Partida 1.ª).

CONSAGRACION DE OBISPOS. Como esplanamos en su artículo correspondiente, dos potestades constituyen el órden y carácter episcopal: la *potestad de jurisdiccion* y la *potestad de órden*. La primera se confiere por la confirmacion de la eleccion, hoy *preconizacion*, y la segunda por la *consagracion*.

Es, pues, la consagracion un acto eclesiástico solemne, en virtud del que, por medio de los ritos y preces de la Iglesia católica, el obispo electo, y ya preconizado, se hace en clase persona sagrada, mediante la sagrada *uncion*; y adquiere la *potestad de órden*, y por tanto, la plenitud del carácter episcopal.

La consagracion, como la eleccion y confirmacion de los obispos, ha tenido las variaciones que permitian los tiempos, y de que dá razon la historia eclesiástica, y nosotros esponemos en los respectivos artículos. Sucesivamente han llegado á su estado actual, y todo está ordenado por los cánones, determinado por los concilios, y formulado por el Pontifical romano, que, como síntesis, ó resúmen autorizado de todo lo canónico en el particular, ha de tenerse principalmente á la vista en los casos de esta naturaleza. El de consagracion de personas en el órden episcopal, es de tal importancia, que, siendo estensivo en sus efectos á todas las eminencias eclesiásticas, desde el Obispo, hasta el Pontífice; y asimismo tan frecuente entre nosotros, antes por la unidad, hoy por la casi unidad de la creencia católica; ligándose, en fin, como se liga, á lo canónico y civil, merece, sin duda, ser espuesto con algunos pormenores, ya en lo relativo á la disciplina general, ya á la particular de España.

Sabido es que, en los tiempos primitivos, la

eleccion de los obispos, se hacia por el pueblo y el clero reunidos: la consagracion por el Metropolitano, y solo en el caso de denegacion injusta, se recurria al Papa. El acto de la consagracion empezaba inquiriendo, si el electo era *digno*. En este acto podian deducirse quejas, y aun hacerse acusaciones, en virtud de las que el electo podia ser repelido, y hasta encausado: y es de notar, que aun hoy se conservan reminiscencias de esta prudente y rigorosa disciplina en la consagracion, tanto por las disposiciones canónicas, segun veremos, como por nuestras leyes de Partidas, y por las consecuencias, en fin, en el ejercicio del patronato real y confirmacion pontificia; como con mayor estension esplanamos en el artículo **obispo**.

Generalizada la iglesia católica, regularizado y afirmado el régimen de la misma, cesaron las elecciones populares; y la nominacion de obispos radicó en el Pontífice; compartida algunas veces, y en cierto modo, esta facultad, con los patronos de presentacion, como son los reyes de España, si bien conservando siempre el Pontífice la confirmacion y preconizacion, hecha en Consistorio (Benedicto XIV, Const. *In postremo*, §§. 15, 16 y 17).

Reservóse el Papa tambien, omnímodamente, la consagracion, si bien delegándola, si tiene lugar en Roma, á algun cardenal, patriarca, arzobispo ú obispo; y fuera de Roma, al nuncio, al arzobispo ó á cualquier obispo de la provincia eclesiástica, defiriendo en esto siempre al deseo del preconizado; y conforme con él, en las bulas que se espiden para la consagracion, se designa al consagrante.

Las leyes de Partida (ley 28, tít. 5.°, Partida 1.ª) asientan que la consagracion habria de hacerse por el metropolitano; pero siendo permitido al consagrante *elegir* otro; y ha de entenderse, como ya queda indicado, que el preconizado designa, espresando su deseo; y la Santa Sede delega, accediendo á la designacion. Despues de aquel tiempo, el Concilio de Trento ordenó: *Consecratio vero, si extra curiam romanam fiat, in ecclesia, ad quam promoti fuerint (los preconizados); aut in provincia, si commode fieri poterit, celebretur.* (Ses. 23, cap. 2, *de Reforma*). Fundado, sin duda, en la facilidad, que permite el Concilio, la disciplina es, en cuanto á España, que defiriendo el Santo Padre, por razones de utilidad ó dificultad, al deseo del preconizado, la consagracion se verifica con frecuencia en la Córte, así como la de obispos de nuestras provincias de Ultramar.

La consagracion ha de pedirse, y recibirse dentro de tres meses de la preconizacion. Ya sobre ello el concilio de Calcedonia (acta 16, cán. 35) lo habia establecido así, bajo la pena de pérdida de frutos, y además del juicio de la Iglesia (cap. *Quoniam*, dist. 75). El cap. *Quoniam* de la dist. 100, reiteró y aun agravó esta disposicion: el Concilio de Trento, por último (lugar citado) reprodujo estas disposiciones canónicas, ordenando, que la consagracion haya de recibirse dentro de los tres primeros meses, despues de la confirmacion; aun cuando el preconizado sea cardenal, pena de la pérdida de frutos, y de la del episcopado, si aun dejase pasar otros tres meses: *Si intra totidem menses postea id facere neglexerint* (el consagrarse), *eccleslis ipso jure sint privati*. Benedicto XIV reiteró la obligacion de haber de consagrarse dentro de los tres primeros meses de la confirmacion (const. citada, §. 2.°).

Al consagrante han de acompañar, por lo menos, otros dos obispos; y si no los hubiere, ó se hiciere imposible su asistencia, dos abades ó dignidades, de designacion pontificia. (dist. 24 cap. *Episcopi*: dist. 64, cap. *Ordinationes*; y cap. *Non debet*, dist. 65).

No es ya cuestion, como lo fué, si el Papa puede ordenar que sea consagrante un solo obispo; si bien acompañado de abades ó dignidades, pues así lo determinan recientes constituciones pontificias (Benedicto XIV, const. *Ex tui præcibus*, §. 21).

La consagracion, en fin, ha de verificarse en Domingo (cap. *Qui in aliquo*, dist. 51, y caps. *Ordinationis* y *Quod dic dominico*, dist. 57). Benedicto XIV dispuso, sin embargo, que pueda asimismo verificarse tambien en el natalicio de los Apóstoles, á no ser que el Papa dispense (const. *In postremo* citada, §. 20).

Conforme á los antiguos cánones, las le-

yes de Partida prescribian que solo en los domingos podian ser consagrados los obispos (ley 13, tít. 10, Part. 1.ª).

Establecian asimismo, que debian ser consagrados por tres obispos, *ó non menos*. Y añadian aun, «é la congregacion debe ser fecha *concejeramente*, porque, si alguno la quisiere contradecir, que sea antes oido que le consagren, sobre aquellas razones de que le quisiesen acusar; é si, ante que el pleito de la acusacion sea librado, le consagraren, ó le mandaren consagrar, aquel su mayoral é los otros deben perder los obispados y tambien el acusado, con aquellos que le consagrasen:» legislacion que corrobora una indicacion que dejamos hecha al principio, que va de acuerdo con los capítulos (*Illud*, dist. 23 y *Super his, De acusatione*); evidenciando todo, porque la consagracion de obispos habia y ha de ser en domingo, procurando así concurrencia cierta y segura (concejeramente); cuando las demás consagraciones no hacen precisa esa circunstancia. Era ciertamente por la cuestion de haber de debatir y averiguar si el electo era *digno*.

Todo así supuesto, hé aquí algunos pormenores más de la consagracion.

Es práctica, que el consagrando, para la solemnidad, lleve su padrino, que en España lo es siempre un alto personaje de la grandeza y primeras gerarquías, y algunas veces el Rey. Llegado el momento, el consagrante, de pontifical, se sienta ante el altar mayor y al pié de la grada el preconizado, sentado tambien con los obispos asistentes, y próximos á ellos el padrino.

El mas antiguo de los obispos asistentes, de pié y dirigiéndose al consagrante, dice en alta voz: *Postulat sancta mater ecclesia catholica ut hunc præsentem presbyterum ad onus episcopatus sublevetis*. En este momento se preguntaba antiguamente, si el electo era digno. Hoy se omite ya, en virtud de los medios supletorios, de que hablamos en el artículo **OBISPO**; y el consagrante pregunta en alta voz tambien, si hay mandato pontificio. Contesta el mas antiguo que lo hay, y el consagrante manda que se lea. En su virtud, un notario eclesiástico puesto de pié, lee en alta voz la bula del caso, en que consta la preconizacion, los méritos y cualidades de digno del preconizado, y el mandato y delegacion de consagracion; arreglando despues diligencia de todo, en formal espediente.

En seguida, el consagrante toma juramento al electo, de fidelidad á la Santa Sede, segun la fórmula de Gregorio VII; sin que ya se observe la cláusula de haber de ir el consagrado á Roma, á ofrecer sus respetos y homenajes al Papa; y en España, el consagrado añade como conclusion del juramento: *Hæc omnia, et singula, inviolabiliter observabo, qui certior sum nihil in illis contineri, quod juramento fidelitatis mcæ erga catholicum nostrum Ispaniarum Regem N, ejusque ad tronum succesores debita, simulque legibus Regni, regaliis, legitimus consuetudinibus, concordiis, et alliis, quibuscumque juribus, ipse, legitime quæsitis adversari possit. Sic me Deus adjubet*.

Despues de esto, el consagrante interroga largamente al electo, conforme al Pontifical, y los cánones (cap. 2, *qui episcopus*, dist. 23), sobre su fé católica, obediencia á la Santa Sede y á los sagrados cánones, y sobre la pureza de costumbres, que ha de observar, su celo por la causa de Dios, y su amor hácia su grey.

Acto continuo, el consagrante empieza la misa solemne en el altar mayor, y el electo inicia misa rezada en otro altar contiguo, acompañado de parte del clero y del padrino.

Despues, totalmente prosternado el electo, con el rostro sobre la tierra, se entona la letanía de los Santos. Concluida, y puesto de rodillas, el consagrante pone sobre sus hombros el libro de los Evangelios, é imponiéndole las manos sobre la cabeza, con los dos obispos asistentes, pronuncia la fórmula, *accipe Spiritum Sanctum*. Luego en un largo prefacio, implora los auxilios del Altísimo sobre el electo. Entónase enseguida el himno del Espíritu Santo, y durante él, el consagrante unge al electo en la cabeza y en las manos con crisma. Concluido, bendice y entrega al electo el báculo pastoral, en señal de jurisdiccion, y el anillo, que en testimonio de su fé, y de su vínculo con su Iglesia, le

pone en el dedo, exhortándole á que juzgue con justicia y sin ira y edifique con el ejemplo. Trasládale entonces el libro de los Evangelios á las manos, recordándole el derecho y la obligacion de predicarlo y enseñarlo á todas las gentes.

Despues el consagrante continúa la misa, y el consagrado vuelve con báculo á su altar, como si entrara en su diócesis. Al ofertorio, viene al altar mayor y por medio del padrino, presenta ofrenda de pan y vino: continúa la misa ya con el consagrante, comulgando con él y como él, de la misma hostia y del mismo cáliz. Concluida la misa, el consagrante, bendice y entrega al consagrado la mitra y los guantes, esplicándole su significacion, y procede á lo que se llama *entronizacion* del mismo, asentándolo, con todas las insignias episcopales, en un trono ó gran sillon, con dosel algunas veces, en el centro del presbiterio. Entónase entonces el *Te Deum*, y durante él, el consagrado, acompañado de los obispos asistentes y clero, desciende y recorre el templo, bendiciendo al pueblo. Regresando al altar mayor, entona y dirige al pueblo solemne bendicion episcopal, hecho lo cual, se despide del consagrante, repitiendo tres veces, con genuflexiones, *ad multos annos*, y concluye el acto, sentándose, acompañado de parte del clero y de su padrino, en el centro del presbiterio, y recibiendo al pueblo á besarle el anillo.

No hay que decir que despues de las elecciones de clérigos y obispos por el pueblo y el clero, en ninguna parte ya, y mucho menos en España, por cuanto queda espuesto, y por la forma en que se hace la presentacion de obispos, puede tener lugar, ni causar vacilacion, la cuestion, antes debatida entre los canonistas, de si un obispo electo puede ser consagrado al dia siguiente de haberse ordenado de presbítero; y eso aun cuando la doctrina y algunos cánones lo resuelven asertivamente (glosa al cánon *Quod á patribus*, dict. 75: C. *Litteras, de tempore ordinationis*).

Por los cánones no puede el obispo consagrado ejercer actos de la potestad de órden el mismo dia de su consagracion (cap. *Quod sicut, De electione*).

Como está mandado, y es práctica que el nuevo obispo sea recibido en la capital de la diócesis por el clero, las autoridades y el pueblo, y que entre en procesion, con sus insignias episcopales, y bajo el pálio; para hacerlo con plena autoridad, es lo comun que, préviamente, haya tomado posesion por poder, otorgado al dean ú otra dignidad, á la cual, con el poder, manda la *Real auxiliatoria*, ó sea la órden y carta Real para que por el clero, autoridades y pueblo sea el nuevo prelado recibido y obedecido, conforme á su cualidad, atribuciones y derechos, al tenor de las Bulas de su razon, que con el pase correspondiente, se trasladan para su cumplimiento (véanse el *Pontifical romano*: Concilio de Trento, por Gallemart, ses. citada: Barbosa, *De Offic. et potestate episcoporum*: Ferraris, *Bibliotheca prompta*, artículos CONSECRATIO y EPISCOPUS).

Los obispos de Ultramar, si residen allí al ser preconizados, allí son consagrados; y en todo caso, sin necesidad de dispensa pontificia, siendo así necesario, pueden serlo por un solo obispo y dos abades ó dignidades.

Si residen en la Península, de ordinario se consagran en ella, ya por mayor comodidad, ya por que toman posesion por poder, y desde luego perciben los frutos; salvo que retarden indebidamente el embarque, en cuyo caso los pierden, hasta que se embarcan: todo conforme á una constitucion de Gregorio XIII, de 28 de Febrero de 1568, obtenida por Felipe II. En los últimos tiempos hay una razon mas, que antes no habia, para que los obispos, preconizados para nuestras provincias de Ultramar, pudiendo, se consagren en la Península, y es la dificultad y á veces imposibilidad, de que cómodamente puedan reunirse, caso que los haya, ni tres obispos, ni dos abades.

CONSAGRACION DEL PAPA. El Papa, en su calidad de obispo, necesita consagracion. Lo es por práctica y especie de priviligio, por el cardenal, obispo de Hostia; aunque el Pontífice puede designar al obispo que le plazca. La consagracion episcopal es siempre la misma en sus pormenores

esenciales, como lo dejamos reseñado para los obispos.

Pero el Papa no es solo obispo de Roma: es el jefe supremo, y cabeza de la cristiandad: universalidad que no puede estar un momento sin ser regida, siendo mas adecuada, sin duda, una plena autoridad, que una autoridad provisoria, que solo la justifican las circunstancias, cuando es de todo punto inescusable. Por otra parte la eleccion de Papa es un asunto de suma gravedad, ocasionada á veces á consecuencia de inmensa trascendencia, ya en la dilacion de ejercicio, ya, si imprevistos sucesos hicieran necesaria nueva eleccion. Por todo ello, es decir, por razones incontestables, los sagrados cánones tienen dispuesto que el Papa, desde que su eleccion canónica es proclamada en el cónclave, se reputa y está en plena y omnímoda autoridad para gobernar la Iglesia universal (dist. 23, cap. 1.° *In nomine domini*: cap. 1.°, §. 5, Decretales, *De sacra unctione*). Véase PAPA.

CONSAGRACION DE REYES. Sabido es que en los tiempos bíblicos los Reyes y los profetas eran ungidos. Esta práctica religiosa pasó al cristianismo, y por los cánones, los Reyes cristianos no están obligados á consagrarse; pero pueden, y la Iglesia autoriza y solemniza ese acto de piedad. Raro es el caso; pero si un soberano católico lo desea, es consagrado, ungiéndole, en forma de cruz, en el brazo, ó en el hombro, con el óleo santo de los catecúmenos (libro 1.°, tít. 15, de las Decretales, cán. 1.°).

CONSANGUINEOS. Los que nacen ligados con vínculo natural de sangre, por proceder genealógicamente de un tronco comun, como los hijos de un mismo padre. *Consanguinidad* espresa este mismo vínculo, que la naturaleza, la moral, y la ley toman en cuenta, dentro de sus fines respectivos, como esplanamos en el artículo PARENTESCO.

CONSEJO. Version de la voz *consilium*, con la misma significacion de dictámen, ó parecer, que se dá á un tercero, ya expontánea y oficiosamente, ya pedido; ya, en fin, obligado, como en el órden moral, por ejemplo, el padre está obligado á dar buenos consejos al hijo; y en lo oficial lo está á dar su dictámen por razon de oficio, el que lo tiene por cargo, como el asesor, el auditor, el consultor, el consejero.

Desde luego se vé que el consejo puede ser inofensivo, provechoso, plausible, y tambien perjucicial, pernicioso hasta un crímen; todo lo cual penderá de las circunstancias del caso. *Consilii non fraudulenti*, decian las leyes romanas, *nulla obligatio est: cæterum, si dolus, et calliditas intencessit, de dolo actio competit* (Digesto, ley 47, *De regulis juris*): esto en el órden civil, y en cuanto á responsabilidad civil: en el órden criminal puede haber lugar á penas del mismo órden. El consejo no es un delito individual en nuestro Código penal; pero lo es específico, y traducible en su causa: si el consejo para realizar un incendio, un asesinato, hubiera sido de tal eficacia, que sin él, segun el criterio racional y jurídico, no se hubieran ejecutado, el aconsejante es reputado autor de estos delitos.

Así ha estado recibido por nuestro antiguo derecho, como lo ha estado y lo está por el de todas las naciones. «Todos aquellos que fueren en consejar tal fecho (la muerte del Rey)... deben morir por ello» (ley 6.°, tít. 13, Part. 2.°). El título 21, *de los consejeros*, encarece la utilidad y conveniencia del consejo y de obrar siempre con consejo. «Todas las cosas faz siempre con consejo, dice la ley 1.°; mas cata ante quien es aquel, con quien te has de aconsejar.»

«E aquel á quien es fecho (el consejo) debe catar si es á su pro, ó non; ca ninguno non es tenudo por premia de tomar consejo, que otro le dá, si non quiere. Por ende non empeze á aquel que lo mandó facer; fueras ende, si fuere fallado en verdad que tal consejo habia dado maliciosamente ó con engaño: ca entonce, cuanto daño le viniere por razon del engaño, seria tenudo de lo pechar» (ley 23, tít. 12, Part. 5.°).

«E aun otro si, dijeron, que ninguno non es obligado á otro del consejo que le dió, maguer que ende viniese daño; fueras ende si se oviese dado aquel consejo engañosamente,

ca estonce el daño, quel oviese por él, seria tenudo de se lo pechar» (ley 6.ª, tít. 34, Partida 7.ª).

«Dijeron que á los malfechores, é á los consejadores, é á los encobridores, debe ser dada igual pena» (ley 19, id. id.).

Dedúcese de todo que el determinar en concreto si un Consejo es ofensivo ó inofensivo, inocente, culpable, ó criminal, es caso de tribunales.

CONSEJO (**como institucion**). Si en la esfera privada es de tal importancia, como hemos visto, y la esperiencia propia de los consejos en general persuade el obrar y proceder con Consejo, necesariamente ha de subir esto de punto en la alta esfera política. Así los príncipes y gobernantes se han ayudado, no ya del consejo de personas singulares, revestidas ó no de carácter oficial; sino aun de corporaciones de consejeros, convenientemente organizadas y elevadas á una institucion política. Han podido llamarse y se han llamado estos centros consultivos de diversas maneras; pero entre nosotros, en lo político y gubernativo ha dominado la denominacion de *Consejo*. Tomando ya la causa por el efecto, ya el efecto por la causa, se ha llamado y llama Consejo la misma corporacion, el local de sus sesiones, y de sus sesiones se dice que se celebra consejo, que se cita á consejo, en el consejo de tal dia, etc.

Numerosas han sido y son entre nosotros las corporaciones, que se han denominado y denominan consejos, y no siempre limitadas á aconsejar; sino tambien con facultades decisivas y aun judiciales.

Haremos, pues, mencion de los principales cuerpos que ha habido en España con este nombre, limitándonos, empero, á la simple indicacion de su existencia y orígen, y á lo que pueda haber de general y comun á todos, dejando lo relativo á sus vicisitudes y atribuciones, al artículo propio de cada uno.

Nuestros Monarcas procuraron siempre rodearse de personas que les ayudasen con su consejo, y á estas funciones fueron primero y naturalmente llamados sus áulicos, como personas mas allegadas al Rey por los vínculos de la amistad y por la hermandad de la milicia.

Así vemos, por ejemplo, verificada la supresion del obispado de Simancas, durante la menor edad de D. Ramiro III de Leon, «*assensu magnatorum palatii mei, et voluntate episcoporum.*» Y poco despues, en el año 985, habiéndose quejado Sabarico, obispo de Leon, ante el Rey D. Bermudo II, de las violencias de los magnates, que se habian apoderado de algunas propiedades de su iglesia, el Rey, sentado en su sólio, *en compañía de los señores Palatinos*, obispos, jueces y abades, y con su acuerdo, falló la cuestion en favor del obispo reclamante (Florez, *España sagrada*, apénd. 10 y 23 á los tomos XVI y XXXIV; Marina, *Ensayo sobre la legislacion*, lib. 2.º, pár. 8.º).

Este Consejo del Rey se llamaba naturalmente Consejo Real, Consejo de Estado, y andando el tiempo, tambien Consejo de Castilla; pero como denominacion genérica, que no ha de confundirse con la específica y relativa de que dá razon la historia. En este sentido parece podemos ver en el hecho mencionado el orígen del Consejo de Estado; si bien no hay noticia de que fuese conocido con este nombre específico, hasta el año 1580, desde el cual aparacen ya arreglados é inventariados sus papeles, bajo aquel título, en el archivo de Simancas.

Hay datos para creer que existía ya otro cuerpo, que recibió mas tarde la denominacion de *Consejo de Castilla*; y que, aunque impropiamente, se llamó consejo, porque, mas que consultivas, tenia atribuciones resolutivas, y era un verdadero tribunal; obtuvo sin embargo tal superioridad, fuera de la precedencia, segun veremos, que tenian los consejeros del Estado, que conservó siempre por antonomasia el nombre de *consejo*; debiéndose entender que se habla de él, cuando se usa esta palabra sola, como el *Consejo del Rey*, el *Real Consejo*, el *nuestro Consejo*, del *Consejo de S. M.*, etc., etc. Su orígen se remonta, segun unos (Escolano de Arrieta, *Práctica del Consejo*, introduccion), al tiempo del Rey D. Fernado el Grande, en quien, y en su mujer Doña Sancha, se reunieron por primera

vez las Coronas de Castilla y Leon. Segun otros, la creacion del Consejo de Castilla no tuvo lugar hasta dos siglos despues, en tiempo del Santo Rey D. Fernando, al volverse á verificar definitivamente la misma reunion; segun otros, en fin, su existencia es anterior al año de 1329, en cuyo año amplió su organizacion el Rey D. Alfonso, por peticion de Córtes (ley 1.ª, tít. 3.º, lib. 4.º, Nov.). Así, aunque con un simple *dícese*, indica lo segundo nuestro historiador Mariana (Mariana, *Historia de España*, lib. 13, cap. 8.º); todavía otros le atribuyen menos antigüedad. Véase, si no, nuestro artículo CÁMARA (*Consejo de la*).

De todos modos, el Consejo de Castilla adquirió desde un principio grande importancia, por despacharse en él todos los asuntos, sin distincion alguna, que se referian á la gobernacion del Estado.

Como prueba de esto, y de la alta consideracion á que llegó, citaremos la carta que inserta D. Antonio Villadares en su *Semanario erudito*, dirigida por el Emperador Cárlos V á su hijo D. Felipe, al partir para Alemania y dejarle encomendado el gobierno del reino en el año 1543, en la cual, despues de llamar al Consejo de Castilla «columna de nuestros reinos,» añade aun: «No permitais que al Consejo se atreva ninguno, por grande que sea, ni muchos grandes juntos; sino que todos le respeten y obedezcan mucho, pues así conviene á vuestra autoridad, á la suya y al bien y ensalzamiento de nuestros reinos.» Coetánea al Consejo de Castilla, como parte y filiacion del mismo, fué la *Cámara de Castilla*, creada en un principio para conocer en todo lo relativo al patronato de la Corona en los asuntos eclesiásticos; y elevada mas tarde al rango de *Consejo de la Cámara*, como esponemos en su artículo.

Pero bien pronto, la estension y engrandecimiento de la Monarquía, por efecto de las conquistas y reunion de las Coronas, así como la necesidad de atender al despacho de nuevos asuntos, con que se iba complicando la gobernacion del Estado, por la creacion de nuevas instituciones, hicieron conveniente la de otras corporaciones especiales, á las que, por tener las mismas ó parecidas atribuciones que la que ya existia, se aplicó naturalmente el título de *consejos*.

Así encontramos en tiempo de los Reyes Católicos el establecimiento del *Consejo de Aragon*, en el que se despachaban todos los asuntos de los Reinos, comprendidos bajo este nombre.

Los Consejos de Italia, Flandes y Portugal fueron otros de los que hubo tambien necesidad de crear por iguales consideraciones, á las que motivaron el establecimiento del de Aragon, con el fin de entender en los muchos y complicados asuntos, que avocaban á la Península española, la adquisicion definitiva de las dos Sicilias, hecha en el año 1503, y la de los Países Bajos y reino Lusitano, que tuvo lugar respectivamente en 1555 y 1580. Portugal se emancipó en el año 1640: la paz de Utrech puso fin, en el de 1713, á la guerra de sucesion, afirmando la Corona de España en las sienes de Felipe V; pero privándole de los Estados de Italia; y este mismo Monarca, en otro tratado, el de la cuádruple alianza, celebrado en 1720, renunció á toda pretension sobre los Países Bajos. Cesando, pues, el objeto de su creacion, hubieron de suprimirse los tres consejos citados.

Pertenece tambien á la época de los Reyes Católicos la creacion del *Consejo de Indias*, destinado á conocer de todos los negocios de las nuevas posesiones de Ultramar, acumuladas á los dominios españoles, durante aquel célebre reinado.

La del *Consejo de la Inquisicion*, llamado *Consejo de la Suprema*, establecido en el año 1483, con el objeto da asegurar los intereses de la Corona en las confiscaciones y velar por la conservacion de la jurisdiccion real y civil (Lafuente, *Historia de España*, parte 2.ª, libro IV, cap. III).

Encargada á los mismos Reyes Católicos por los Sumos Pontífices, Inocencio VIII y Alejandro VI, la administracion vitalicia de los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava, y previniéndose en los breves respectivos que la jurisdiccion espiritual debia ejercerse por personas religiosas de las mismas órdenes, nombradas

ad nutum por los monarcas, creyeron éstos conveniente la creacion de un *Consejo*, que se llamó *de las Ordenes*, para el ejercicio de dicha jurisdiccion. Este Consejo adquirió mas vida y mayor importancia, cuando, por breve de Adriano VI, se convirtió la administracion de los maestrazgos en incorporacion perpétua á la Corona de España, aunque la sucesion recayese en hembra; creciendo la estension de sus atribuciones, cuando mas adelante, se incorporó igualmente á la Corona, por el Papa Sixto V, el maestrazgo de la órden de Montesa.

Siguen en órden y antigüedad á los citados el *Consejo de Hacienda* y el *de Cruzada*, creados ambos por Felipe II, para entender esclusivamente en los ramos que su respectivo nombre indica. El primero existia ya en el año 1554, al publicarse la instruccion, que forma la ley 9, tít. 11, lib. 2.° de la Nov.; y del segundo hace mencion la carta acordada de 12 de Junio de 1583, mandada observar por cédula de 27 de Noviembre del siguiente año, y á que se refiere la nota á la ley 1.°, del mismo título y libro. Este último fué suprimido en el año 1750 (ley 12, tít. 11, lib. 2.°, Nov.). Ultimamente, es tambien de este tiempo el *Supremo Consejo de Guerra*, que existia antes del año 1622, y al que hacen referencia las disposiciones, que contiene la ley 2.°, tít. 5.°, lib. 6.° de la Novísima.

Estos eran los consejos ó, hablando mas propiamente, los tribunales y corporaciones superiores, que hoy llamariamos cuerpos ó departamentos centrales, y que en último recurso, salvo el poder Real, conocian y fallaban en todos los negocios de la administracion pública, que, no deslindada entonces, como lo ha sido despues, lo mismo comprendia lo simplemente administrativo, que lo gubernativo y lo judicial.

Aunque de orígen mas antiguo los unos que los otros, y sobresaliendo alguno de ellos en importancia, sobre todos los demás, como ya hemos indicado, la distancia casi igual, á que todos se hallaban del entonces poder soberano, y lo parecido de las atribuciones supremas, que cada uno ejercia en su ramo, dieron lugar á multiplicadas cuestiones que, aunque parezcan de poco interés, por ser propiamente cuestiones de etiqueta, influian, sin embargo, en el despacho de los negocios, y por consiguiente en el servicio público. Ocasion hubo, en que, por no haberse podido entender ni convenir respecto al asiento, que deberian ocupar los individuos de distintos Consejos, estuvo sin verse, por espacio de tres años, un pleito, en que debian conocer dos consejeros de Castilla, dos de guerra y uno de hacienda (nota 13 de la ley 18, tít. 3.°, lib. 4.°, Nov.). Y no eran menores, aunque no de tanta trascendencia, los conflictos que se suscitaban, siempre que los Consejos concurrian en público á funciones religiosas ú otros actos solemnes. Hubo, pues, necesidad de dictar reglas, que pusiesen fin á estas disensiones, y que por lo repetidas y con frecuencia modificadas, nos dan una idea del empeño, con que cada Consejo sostenia sus propias, ó pretendidas preeminencias, y el influjo que sus individuos ejercian sobre el Soberano.

El órden, que al fin guardaban, cuando concurrian en cuerpo, era el siguiente. Si asistia el Rey, formaban en hileras distintas, comenzando Cruzada y Hacienda, y acabando Inquisicion, Aragon y Castilla. Si el Rey no asistia, iba cada Consejo por separado, formado en dos filas, por el órden dicho, y cerrando la marcha de cada uno el respectivo presidente. Esto es lo único que dá, como establecido, la ley 11 del tít. 3.° lib. 4.° de la Novísima; debiendo inferirse de las palabras de su preámbulo, «respecto de que el estilo ha sido ir los Consejos en hileras distintas por sus antigüedades,» que despues del Consejo de Hacienda y antes del de la Inquisicion, irian, por este órden, los de Guerra, Ordenes, Indias, Flandes, Portugal é Italia.

En cuanto á la presidencia de los Consejeros, cuando se reunian los de diversos Consejos en alguno de ellos, juntas, comisiones ú otros actos semejantes, acabóse por resolver que se guardase la antigüedad del individuo, en su respectivo cargo, sin consideracion al Consejo á que pertenecia (ley 18, tít. 3.°, libro 4.°, Nov.).

Esta disposicion no comprendia, sin embar-

go, á los consejeros del de Estado. Estos, por ser el dicho consejo el de *mayor dignidad en la Corona*, por el *alto carácter* de las personas que lo componian, empezando *desde la* del Rey, *como su presidente* y por *la importancia y sublimidad de las materias que en él se* trataban (ley 2.ª, tít. 7.º, lib. 6.º, id.), tenian el derecho de presidir á todos los de los demás Consejos, siempre que asistian á cualquiera de estos; esceptuándose tan solo los presidentes ó gobernadores de los de Castilla é Indias, y decanos y gobernadores de los demás, los cuales, *hallándose formados en sus respectivos cuerpos* (ley citada), debian siempre presidir á todos los asistentes.

Las nuevas ideas políticas, y la necesidad de separar, segun ellas, las atribuciones judiciales y administrativas, que hasta entonces se habian ejercido sin distincion por las referidas corporaciones, vinieron á influir, desde principios de este siglo, en la existencia de los Consejos que, á la sazon y segun hemos visto, no habian sido suprimidos. Así es que, despues de haber sufrido las mismas vicisitudes, por que pasó el gobierno del país, en las épocas de 1808 á 1814 y de 1820 á 1823, se suspendió el Consejo de Estado, durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, y se suprimieron los de Castilla, Indias, Guerra y Hacienda, por Reales decretos de 24 de Marzo de 1834, y el de la Inquisicion por otro Real decreto de 15 de Julio del mismo año. La suspension del de Estado se fundaba en la existencia del *Consejo de gobierno*, creado por Fernando VII en su testamento: á pesar, sin embargo, de haber cesado éste en sus funciones, no volvió á restablecerse aquel; si bien puede decirse reemplazado por otro cuerpo, puramente consultivo, creado por decreto de la misma fecha (24 de Marzo de 1834), con el título de Consejo Real de España é Indias; suprimido otra vez por decreto de 28 de Setiembre de 1836, á consecuencia del restablecimiento de la Constitucion de 1812, cuyo artículo 236 no admite para el Rey otro Consejo que el de Estado, vuelto á crear, con el nombre de *Consejo Real*, por la ley de 6 de Julio de 1845; y que ha continuado hasta nuestros dias, no sin haber recobrado la primitiva denominacion de *Consejo de Estado*, en virtud del Real decreto de 14 de Julio de 1858 y de la ley de 17 de Agosto de 1860.

Y no es esta la única corporacion que, despues del cambio político, operado en España al principiar el segundo tercio del presente siglo, ha sido conocida con el nombre de *Consejo*. Aunque de muchísima menos importancia, y sin mencionar mas que á los que han ejercido funciones generales en toda la nacion, enumeraremos el *Real Consejo de Sanidad*, establecido por Real decreto de 17 de Marzo de 1847; el creado por Real decreto de 9 de Abril del propio año, con el título de *agricultura y comercio*, que se amplió por otro Real decreto de 7 de Octubre siguiente, al de *agricultura, industria y comercio*: el de *Ultramar*, creado por Real decreto de 30 de Setiembre de 1851: el de *Instruccion pública*, mandado establecer por la ley de 9 de Setiembre de 1857; el de *redencion y enganches del servicio militar*, creado por la de 20 de Noviembre de 1859; y el *Supremo de Guerra*, establecido recientemente por decreto del poder ejecutivo, de 16 de Abril del año próximo pasado 1869, en sustitucion del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, suprimido en la misma fecha.

De todos estos Consejos solo existen en el dia los dos últimos: de los demás, el de Ultramar fué suprimido en 21 de Setiembre de 1853; y los de Instruccion pública, Sanidad y Agricultura, Industria y Comercio, lo han sido respectivamente por decretos del Gobierno provisional, de 10 de Octubre y 18 de Noviembre de 1868, los dos primeros, y el último por decreto del poder ejecutivo, de 5 de Abril del citado año 1869. Véanse ahora en particular los Consejos en los sucesivos artículos.

CONSEJO DE ADMINISTRACION (EN ULTRAMAR). Estableciéronse para todas las provincias de Ultramar, por Real decreto de 4 de Julio de 1861, en reemplazo de las juntas de fomento y comercio de las islas de Cuba y Puerto Rico, que quedaron suprimidas por el mismo decreto, cesando así bien (art. 45) los Reales Acuerdos de

conocer de la administracion del país, y lo propio cualesquier otras juntas ó centros administrativos. El Real decreto dispone, entre otras cosas:

«Art. 1.° En cada una de las provincias de Ultramar, y con residencia en la capital de las mismas, se establecerá un Consejo de administracion, que será presidido por el gobernador superior civil respectivo. Estos cuerpos se compondrán de consejeros natos y consejeros de real nombramiento.

»Art. 2.° Serán consejeros en la isla de Cuba:

El gobernador superior civil, presidente.

El muy reverendo arzobispo metropolitano.

El reverendo obispo de la Habana.

El comandante general del apostadero.

El regente de la Real Audiencia.

El intendente general de ejército y hacienda.

Mi fiscal en la Real Audiencia.

El presidente del Tribunal de Cuentas.

EN LAS ISLAS FILIPINAS.

El gobernador superior civil, presidente.

El muy reverendo arzobispo metropolitano.

Los reverendos obispos sufragáneos.

El comandante general del apostadero.

El regente de la Real Audiencia.

El intendente de ejército y Hacienda de Luzon.

Mi fiscal en la Real Audiencia.

El presidente del Tribunal de Cuentas.

EN PUERTO-RICO.

El gobernador superior civil, presidente.

El reverendo obispo diocesano.

El regente de la Real Audiencia.

El intendente general de ejército y Hacienda.

Mi fiscal de la Real Audiencia.

El presidente del Tribunal de Cuentas.

»Art. 3.° Los Consejos de administracion se dividirán en tres secciones, que se denominarán *de lo Contencioso, de Hacienda* y *de Gobierno*, y serán presididas respectivamente por el regente de la Real Audiencia, por el intendente de ejército y Hacienda, y por mi fiscal en dicho superior tribunal.....

»Art. 6.° Estos consejeros no podrán ejercer ningun cargo en sociedades industriales ni mercantiles.

»Art. 7.° Las secciones de Hacienda y de Gobierno se compondrán de sus presidentes y de consejeros de Real nombramiento, que se designarán siempre de órden mia. El número de estos consejeros podrá ser hasta de 22 en la isla de Cuba y de 12 en Filipinas y Puerto-Rico.

Estos cargos serán honoríficos y gratuitos, incompatibles con toda funcion pública retribuida, corresponden á la primera categoría de la administracion de Ultramar, y solo podrán recaer en personas, que, además de llevar seis años, por lo menos, en la provincia respectiva, reuniesen alguna de las circunstancias siguientes:

Títulos de Castilla.

Propietario comprendido entre los cincuenta mayores contribuyentes, en las provincias, en que fuere posible esta clasificacion, ó en otro caso notoriamente acaudalado.

Director ó subdirector de los Bancos.

Prior ó cónsul de los tribunales de comercio.

Individuos de las juntas de Fomento ó Comercio.

Alcalde ordinario de las capitales de Ultramar.

Mi Gobierno podrá nombrar, fuera de estas categorías y dentro del número marcado en este artículo, cuatro consejeros para la isla de Cuba y dos para las de Filipinas y Puerto-Rico, que á la residencia de seis años reunan las circunstancias de notoria ilustracion ó de conocimientos especiales.

»Art. 8.° En cada una de las secciones de Hacienda y de Gobierno habrá un ponente, que se designará de órden mia de entre los consejeros que compongan las secciones de lo Contencioso. Los otros consejeros de estas últimas sustituirán en ausencias y enfermedades á los que fueren designados para ponentes en las de Hacienda y de Gobierno. En la seccion de lo Contencioso será ponente en cada negocio el consejero, que fuere designado por el presidente de la misma.....

»Art. 11. Los Consejos de administracion

de las provincias de Ultramar tendrán el tratamiento de excelencia.....

»Art. 16. Los Consejos de administracion informarán en pleno:

1.° Sobre los presupuestos generales de ingresos de cada provincia y sobre los de gastos de todos los servicios de Hacienda, de Gobernacion y de Fomento.

2.° Sobre los presupuestos provinciales y municipales, establecidos hoy, ó que en lo sucesivo se establecieren.

3.° Sobre la reforma fundamental de los reglamentos é instrucciones generales para cualquier ramo de la administracion, que los gobernadores superiores civiles hayan de proponer á mi Gobierno.

4.° Sobre los asuntos del Real Patronato, y recursos de proteccion, en que hasta ahora ha consultado el Real Acuerdo.

5.° Sobre creacion de nuevos ayuntamientos ó traslacion ó supresion de los existentes.

6.° Sobre las escepciones para rehusar cargos concejiles.

7.° Sobre las inclusiones indebidas ú omisiones en las listas para elecciones municipales.

8.° Sobre conceder ó negar á los pueblos, ó establecimientos públicos, el permiso que soliciten para enagenar ó cambiar sus bienes y para contraer empréstitos.

9.° Sobre todos los asuntos que las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales sometan al exámen de dichos Consejos y cuando lo determine mi Gobierno.

»Art. 17. Podrán además informar los Consejos, en pleno ó en secciones, á juicio del gobernador superior civil:

1.° Sobre la reforma parcial de los reglamentos ó instrucciones en cualquier ramo de la administracion.

2.° Sobre los proyectos de reforma ó mejora de cualquier ramo del servicio público que el gobernador superior civil hubiese de someter á mi Gobierno.

3.° Sobre la espedicion de títulos provisionales en los oficios enagenados.

4.° Sobre los asuntos, que tomen las municipalidades y cuya aprobacion corresponde al gobernador superior civil.

5.° Sobre los demás negocios administrativos, en que hasta ahora consultaba el Real Acuerdo ó informaban las juntas, que queden suprimidas por este mi Real decreto, y en todos los demás casos, en que lo estimen conveniente los gobernadores superiores civiles. La seccion de Hacienda informará, en su caso, sobre los negocios de la administracion económica, y del mismo modo la de gobierno en los de Gobernacion y Fomento.....

«Art. 19. Los Consejos en pleno no podrán deliberar sin la concurrencia de la mitad, mas uno de los consejeros, que habitualmente residen en la capital, y en todos los casos sin la mayoría de la seccion, que haya preparado el dictámen.

»Art. 20. Las secciones no podrán acordar en los asuntos sometidos á su deliberacion y exámen sin la concurrencia de la mayoría.

»Art. 21. Los informes del Consejo pleno y de la secciones no podrán publicarse sin autorizacion expresa del Gobierno ó del gobernador superior civil, fuera de los casos, en que las leyes, reglamentos ú otras disposiciones determinen lo contrario.....

»Art. 41. El fiscal representará y defenderá por escrito y de palabra á la administracion: y aun cuando no fuere parte en el pleito, será oido siempre que lo determinen las leyes, reglamentos ó disposiciones del Gobierno, ó lo acuerde como conveniente la seccion de lo Contencioso. Tambien representará y defenderá á los ayuntamientos y establecimientos públicos, cuando no litiguen entre sí, ó con la administracion, ó contra providencias de la misma.

»Art. 42. En los asuntos contenciosos, las partes contrarias, ó coadyuvantes de la administracion, estarán representadas y serán defendidas por abogados del Consejo. Son abogados del Consejo todos los que estuvieren habilitados para ejercer dichos cargos ante la Audiencia respectiva. Véanse los artículos **CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** (*en la Península*): **CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** (*en Ultramar*).

CONSEJO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Una de las primeras obras del mi-

nisterio de Comercio, Instruccion y Obras públicas, creado en 28 de Enero de 1847, fué el establecimiento, por Real decreto de 6 de Abril del mismo año, de un Consejo de agricultura y comercio, que diera su dictámen sobre las cuestiones que se le sometieren por el mismo ministerio, y procediese, cuando se le autorizára para ello, á la averiguacion de hechos, por medio de informacion escrita ó verbal. Debia componerse del ministro del ramo, presidente; de un vicepresidente, y de catorce vocales, de los cuales dos deberian ser nombrados por conducto del ministro de Hacienda, y todos los demás por el comercio. Las funciones de secretario se asignaron al oficial de este ramo en el ministerio.»

Pocos dias despues, otro Real decreto del 29, elevó á veinte el número de los vocales; y por otro de 7 de Octubre del mismo año, se completó y amplió la organizacion del Consejo; se cambió su nombre por el de Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio; se refundió en él la junta consultiva de la cria caballar; se aumentó su número con los individuos que componian dicha junta, y con diez y ocho mas de Real nombramiento; y se le dividió en tres secciones, respectivamente denominadas de agricultura, de industria y de comercio.

En 22 de Enero de 1849 se decretó la supresion de las dos primeras plazas, que vacasen en este Real Consejo; pero en 22 de Junio siguiente se le aumentaron tres nuevas; y en 7 de Mayo de 1851 se declaró individuos natos al director general del arma de caballería, y al de las Reales caballerizas.

Por último, fué reorganizado este Real Consejo por Real decreto de 14 de Diciembre de 1859. Se componia, segun su tenor, del ministro de Fomento, de ocho consejeros natos, y de treinta odinarios. Los natos son el director general de agricultura, industria y comercio, el presidente de la asociacion general de ganaderos, los directores generales de aduanas, y de caballería, el intendente general de la Real casa y Patrimonio, el director de la sociedad económica matritense, y del gobernador del Banco de España. Lo fué tambien el director general de Ultramar, hasta que la direccion se convirtió en ministerio; pero el número de consejeros natos, continuó siendo de ocho, por haberse concedido esta consideracion al comisario régio de agricultura de la provincia de Madrid. Las secciones continuaron siendo las tres, antes espresadas.

El Consejo era consultado por conducto de cualquiera de los ministerios, cuando el Gobierno lo estimaba conveniente, sobre los asuntos relativos á los tres ramos de su denominacion, y señaladamente: 1.° sobre los proyectos de ley, decretos y reglamentos que podian tener influjo directo en el Estado y prosperidad de la agricultura, industria y comercio: 2.° sobre los sistemas, que convenga ensayar en beneficio de los tres ramos espresados: 3.° sobre la organizacion de los servicios públicos, concernientes á los mismos: 4.° sobre las ordenanzas de aguas, pastos, acotamientos, y demás ramos de policía rural: 5.° sobre establecimiento de poblaciones rurales ó colonias agrícolas: 6.° sobre creacion de bancos agrícolas ó sociedades de crédito territorial ó agrícola; y 7.° sobre la formacion, revision de aranceles de importacion y esportacion, y providencias, que podian afectarlos de una manera directa.

Por Real decreto de 5 de Setiembre de 1860 se aprobó el reglamento de este Real Consejo, en el que se establecia el régimen de sus sesiones y deliberaciones, así en pleno, como en sus secciones, y en sus comisiones, y se marcaban los deberes y facultades de su presidente, vice-presidente, consejeros, secretario general, y empleados subalternos.

Este Consejo fué suprimido por decreto de 5 de Abril de 1869; y por otro de 28 de Mayo del mismo año, se creó en la Córte una Junta superior de agricultura, industria y comercio, y otra respectiva en cada capital de provincia, subordinadas al ministerio de Fomento.

CONSEJO DEL ALMIRANTAZGO. Entre los diversos ramos de la administracion del Estado, apenas hay ninguno mas dividido en las formas de su régimen, que el de la marina. De aquí la inmen-

sidad de artículos, á que se presta, y la dificultad de acomodarlo al método de la ENCICLOPEDIA, sin destruir la unidad de esposicion. Hay, sin embargo, dos enunciaciones, que todo lo abarcan: *armada* y *marina*, pero de una generalidad no acomodada tampoco á la ENCICLOPEDIA, por lo cual suprimimos el primero. Por todo ello, y aunque con inevitable anomalía, adoptamos las cabezas de artículos mas adecuadas, cual es, entre ellas, la del presente, en el cual acumulamos algunas otras enunciaciones mas subalternas, por las razones indicadas, y por la que aun espresarémos.

Ya en el artículo **ALMIRANTAZGO**, hemos adelantado algunas especies relativas á esta alta dignidad, y al régimen de la marina. Volveremos á hacer notar, que el *almirantazgo*, no es, ni ha sido siempre, un cargo oficial personal, ni menos de índole fija y constante en tal concepto; sino, con mas frecuencia, una elevada categoría de honor, que se otorgaba, mas bien al personaje, que á un servicio público; y hasta fué no por poco tiempo, puramente una dignidad hereditaria. Se otorgó ciertamente en el primer concepto por el Rey San Fernando, y tal cual se presenta su orígen en las leyes de Partida (leyes 24, tít. 9, y 3 y 5, tít. 24, Partida 2.ª), á Ramon Bonifaz, primer almirante de España, segun decimos en su artículo: puede reputarse que se otorgó en el segundo concepto, esto es, que se procuró mas bien el cargo para el sugeto, y no el sugeto para el cargo oficial, en los nombramientos de D. Juan de Austria, hijo de Felipe IV, del Príncipe Don Felipe, hijo de Felipe V, del Infante D. Antonio, en 1814, y del Príncipe de la Paz, en 1807; y radicó, en fin, largos años, como dignidad hereditaria, en la casa de los Enriquez.

Cuando se proveía en el primero y segundo concepto, se procuraba aproximarlo á la verdad; y como por otra parte la Armada necesitaba de régimen; y no habian de duplicarse los cargos oficiales, atenuando así el prestigio del superior, se ligaban á este los elementos y formas de régimen positivo, con la denominacion de *consejo*, de *junta*, de *direccion*, etc.; elementos y formas oficiales, que muchas veces han existido, sin el connotado de *almirantazgo*, y de que haremos aquí mencion, sin embargo, por la circunstancia espresada á la cabeza del artículo.

Y al presente, por otra mas todavía. Ya antes habia habido alguna vez *almiratazgo*, *junta de almirantazgo*, y *Consejo de almirantazgo*, no como dignidad y cargo personal de mando supremo de la armada, como en otros tiempos; sino un centro directivo y consultivo, y aun judicial, que prestaba á los que regian la marina, el mismo auxilio y servicio, que prestaría el almirante ó generalísimo de marina, si lo hubiera: lo cual hoy se realiza mas de lleno, con la reciente creacion del nuevo *almirantazgo*, tal cual lo esponemos al final de este artículo. Desde esta creacion, la enunciacion de *almirantazgo*, es un título universal en el régimen de la marina, como lo son en su caso los de *armada* y *marina*, y justifica plenamente la estension que le damos.

En tal supuesto, diremos que, al crear el Santo Rey D. Fernando el cargo de almirante, encomendado á Bonifaz, le concedió autoridad omnímoda sobre todas las cosas de la mar, «como si el Rey mismo, y fuese», sin sujecion á ninguna otra autoridad, ni obligacion de oir á junta ni corporacion alguna.

Sin embargo, natural era, que en las cosas, en que el Consejo es necesario y del interés del servicio, el almirante tuviese á quien consultar, y vemos ya por las mismas leyes de Partida (5.ª, tít. 24 citada), que en los *naocheros* ó *pilotos*, se exigia, como circunstancia personal, «que fuesen de buen entendimiento, para entender bien las cosas que obiesen de facer, é para saber consejar derechamente al Rey ó al almirante, ó al comitre, cuando les demandasen consejo.»

Así siguieron las cosas de mar, sin mas autoridad que la del almirante, que resumia toda la jurisdiccion civil y criminal, hasta que el Rey Felipe V confirió á su hijo, D. Felipe, gran prior de Castilla, en 14 de Marzo de 1737, el almirantazgo general de España y de todos los negocios marítimos, para que, representando la Real Persona, y haciendo sus veces, tuviese el mando de todos ellos y pro-

veyese cuanto viese ser necesario para su buen gobierno, y ejerciese sobre la gente empleada en las fuerzas marítimas *toda la jurisdiccion civil y criminal, alta, baja, mero y mixto imperio*, que S. M. tiene; y para que pudiese dar comision á la persona, que le pareciese, para que en su lugar conociese y determinase las causas de justicia conforme á derecho.

Por Real cédula de 21 de Junio, dada en Aranjuez, haciendo referencia al citado nombramiento del Infante D. Felipe, «á fin de que pueda sostener y promover sus armadas de España é Indias, el comercio de todos sus dominios, su defensa y la de la Religion,» se creó una junta, que presidiria S. A. y compuesta de cuatro tenientes generales de marina, uno de ellos, el célebre marqués de la Ensenada.

A la muerte del Príncipe, quedó la junta disuelta; y en su lugar, y andando los tiempos, se creó la *Direccion general de la armada*, segun lo dispuesto en su Ordenanza de 1748.

Dejada de proveer la dignidad de Almirante por Fernando VI, siguieron las cosas en tal estado, hasta que en 3 de Enero de 1796, se mandó que un capitan general de departamento, con residencia en Madrid, fuese *director é inspector general*, teniendo el mando en jefe de la marina, considerándose como subdelegados suyos, los que quedasen al frente de los departamentos, que á su vez serian inspectores particulares del distrito de su mando.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con las juntas de comercio, se restableció en 13 de Enero de 1807, la dignidad de almirante, en D. Manuel Godoy, formándose un *Consejo de Almirantazgo*, compuesto de tres tenientes generales de la armada, del intendente general, del auditor general, del jefe de escuadra, secretario, de un capitan de navío, contador, y del tesorero del Almirantazgo, modelando dicho Consejo por las instituciones de Inglaterra.

Las atribuciones del Consejo del Almirantazgo, segun cédula, dada en Aranjuez, á 27 de Febrero, eran en los negocios no contenciosos, de consultor del almirante; en los de justicia, de tribunal supremo con plenitud de facultades y jurisdiccion, para conocer y decidir, á pluralidad de votos, todas las causas civiles y criminales, que de cualquier modo perteneciesen al fuero del Almirantazgo.

Se suprimió el empleo de director general, quedando el de inspector, que entendiese en el detalle y mecanismo del mando de la misma armada, celase que todos cumpliesen exactamente con las obligaciones de su empleo, espidiese las órdenes conducentes al mejor régimen de los cuerpos de marina, y desempeñase las demás funciones de pura direccion.

Segun dicha cédula (arts. 17, 31 y 32) en lugar del tribunal de la suprimida direccion general, se estableció un *juzgado de Almirantazgo*, en Madrid, con jurisdiccion á veinte leguas en contorno, para conocer en primera instancia de las causas civiles y criminales de los aforados.

Todas las atribuciones, concedidas por las ordenanzas al Supremo Consejo de la Guerra, se traspasaron al del Almirantazgo, para el cual se habian de otorgar las apelaciones de los tribunales inferiores, sin que pudiesen ejecutarse las sentencias de muerte, sin la revision del proceso por el Consejo, ó el respectivo tribunal superior de Almirantazgo; á no ser en caso de sedicion en alta mar, ú otros casos semejantes, urgentísimos por su naturaleza (art. 36).

Los mismos tribunales habian de conocer en las causas y pleitos de todos los aforados, en los asuntos puramente contenciosos de arsenales, astilleros, montes de marina, fábricas de efectos marítimos, seguridad y limpieza de puertos, etc., rescates en la mar y contrabando de guerra, pesca, incendios, naufragios, arribadas, delitos cometidos á bordo de buques españoles, en el mar, puertos, obras, costas ó rios navegables hasta el primer puente (arts. 37, 38 y 36).

En 15 de Junio de 1814 se restableció el *Consejo de la Guerra* (véase su artículo). La segunda sala de gobierno se componia de cuatro generales de la armada, un intendente de marina, un ministro togado, un fiscal,

al menos brigadier de la armada, y un secretario.

La sala segunda entendia, así bien, de todo lo gubernativo y consultivo, tocante á armamento de navíos, escuadras, presas en el mar, armadores y corsarios, asientos y provisiones de la armada, fábricas pertenecientes á esta, procesos y negocios de oficiales, tropa, y gente de mar; y en todo lo tocante á la marina, que no estuviese atribuido á la Direccion general de la armada, que, por entonces, se dejaba subsistente, á los capitanes generales de los tres departamentos, intendente de ellos y otros jefes, segun las Ordenanzas de la armada y resoluciones posteriores (Real decreto de 15 de Junio de 1814).

La sala de justicia conocia de todos los negocios contenciosos y causas del fuero militar, en grado de apelacion: cuando en los negocios de presas ocurria cuestion, que para decidirse atinadamente, exigia conocimientos prácticos marineros, pasaba uno de los generales de la armada, á eleccion del decano, á presidir con voto la sala, lo que igualmente se observaba, escepto en cuanto á la presidencia, si algun negocio requeria conocimientos del intendente de la armada. Tambien conocia la sala de justicia en los recursos de indulto y en apelacion de las causas y negocios contenciosos, en que hubiese entendido en primera instancia el asesor de los cuerpos de la Real casa y en apelacion de las testamentarías de los consejeros.

En 11 de Julio del mismo año, con el objeto de mejorar el régimen y sistema militar de la armada, y de obtener en el armamento y gobierno de bajeles y escuadras, toda la perfeccion posible, se creó una *Junta de marina*, que debia ser presidida por el infante D. Antonio.

A propuesta de esta junta se aprobó, en 25 de Julio del mismo año, el establecimiento de un *Tribunal ó Consejo de marina*, con la denominacion que siempre se habia acostumbrado darle de *Almirantazgo*, nombrando *almirante general de España é Indias al infante D. Antonio*; y en 18 de Agosto se mandó que pasasen al Almirantazgo todos los asuntos y negocios relativos á la marina, atribuidos al Consejo supremo de la Guerra, por el Real decreto de 15 de Junio de 1814, antes mencionado, quedando á este Consejo las demás atribuciones, que se le señalaban en el referido decreto.

Por otro Real decreto, de 28 de Julio de 1815, se detallaron con más precision las materias de que habia de conocer el *Almirantazgo* ó *Consejo de Marina*, ó *Supremo Consejo del Almirantazgo*, que las tres denominaciones se le dan en el dicho Real decreto, y que con corta diferencia eran las mismas que se le señalaban al Consejo supremo de la Guerra por el Real decreto, ya citado, de 15 de Junio de 1814; solo que las dos salas de gobierno se refundian en una, y en vez de un ministro togado, se nombraba un auditor general, añadiéndose tambien un ministro político. La presidencia del Consejo de Almirantazgo quedó reservada al Rey, quien concedió la vicepresidencia al almirante y el decanato al que fuera director general de la Real armada, y que habia de presidir á falta del almirante.

A la sala de justicia se la conservaban las atribuciones, que por el decreto de 15 de Junio se la conferian, con arreglo á las prevenciones en él establecidas para los negocios en que se exigiesen conocimientos prácticos de marina ó peculiares del intendente.

Por muerte del infante D. Antonio, con el fin de simplificar el gobierno de la Real armada y despachar sus negocios con rapidez, se restableció, en 22 de Diciembre de 1818, el personal, creado por la Ordenanza de 1795 con un *director general*; y mediante á que en dicha ordenanza no se hablaba del Consejo del Almirantazgo, ni existia la dignidad de almirante, se suprimieron, y se reunió aquel al Consejo de Guerra, bajo las mismas reglas, establecidas por el Real decreto de 15 de Junio de 1814.

Pero surgieron dudas y dificultades, respecto á las materias que pertenecian al Consejo de la Guerra y á la *direccion de la armada*; y para resolverlas, se dió el Real decreto de 18 de Marzo de 1819, en el que se prevenia que la *direccion de la armada* quedaba restablecida, con todas las facultades de ordenanza, reduciéndose las del Consejo en

el *ramo de marina* al conocimiento de las causas respectivas al fuero y procesos militares de los individuos de marina y á evacuar las consultas en los asuntos de gobierno en que S. M. tuviese por conveniente oir el dictámen del Consejo sobre materias de esta clase, observándose, en lo que no estuviese derogado espresamente por éste, lo prevenido en el decreto de 15 de Junio de 1814 y Real cédula de 12 de Febrero de 1816, que restablecia al Consejo de la Guerra en todas las facultades que tenia hasta el año 1717, debiendo consultársele todos los empleos militares, lo relativo á reclutas, levas, remontas, cuarteles, alojamientos, asientos de provisiones y cuanto era perteneciente al ramo de guerra.

Las Córtes, en 27 de Diciembre de 1821, decretaron la ley orgánica de la armada, y mudaron el nombre á la direccion general, restableciendo la *Junta de Almirantazgo*, compuesta de tres oficiales generales, dos capitanes de navío, dos individuos del comercio marítimo de la Península, otros dos de Ultramar, un intendente y un secretario sin voto, á propuesta del Almirantazgo, pudiendo presidir la junta, siempre que lo creyera conveniente, el Secretario del despacho de Marina, y siendo en su ausencia presidente nato el oficial mas antiguo ó el de mayor graduacion.

Segun los artículos 5.°, 6.° y 7.°, las facultades y obligaciones de este Almirantazgo habian de ser las que prescriben las Ordenanzas al director general, al mayor general y al inspector de la armada, cuyas funciones y destinos se refundian en el Almirantazgo. Además, tendria la direccion é inspeccion del cuerpo administrativo, la de los observatorios, depósitos hidrográficos y cualesquiera otros establecimientos de marina, debiendo proponer al Rey las medidas que creyere convenientes para su mejora, é indicar al Gobierno la distribucion mas oportuna de la fuerza armada y personas que debiesen revistar arsenales, escuadras y buques sueltos, y en general cuanto contemplase necesario ó útil para la mejor disciplina, administracion, fomento y mejora, tanto de la marina de guerra, como de la mercante, en sus diferentes ramos, y representar fundadamente sobre los perjuicios, que puedan originarse, de las providencias del Gobierno, sin dejar por esto de obedecerlas.

Tambien era de su incumbencia comisionar oficiales, que examinasen los diarios de navegacion de cualquier buque de la armada, que llegan á puerto, capital del departamento, para informar el mérito respectivo y buen desempeño de los oficiales de los buques.

Bajo su proteccion estaban la construccion naval, todos los ramos de la industria marítima y las escuelas náuticas consulares, y á su cuidado el que la enseñanza fuera uniforme, por punto general, y el que se observase religiosamente el reglamento de las escuelas.

Sin prévia noticia del Almirantazgo, que debia informar al Gobierno sobre su utilidad ó perjuicio, no podian emprenderse obras hidráulicas en ningun puerto, aun siendo á espensas de los pueblos ó corporaciones particulares.

Obligacion suya era tambien proponer al Gobierno, prévios informes de los consulados de las provincias marítimas del Reino, las tarifas de los derechos exigibles por los cónsules y vicecónsules de España, en puertos estranjeros, y la igualdad ó proporcion en los demás impuestos, que los buques acostumbraban pagar en nuestros puertos, y la tarifa de los que hubiesen de cobrarse á los buques estranjeros.

A su cargo corria el reunir los informes, que los jefes ó comandantes debian dirigirle anualmente, sobre la conducta, aplicacion y aptitud de los oficiales, que tuvieren á sus órdenes, y las recomendaciones que los cónsules hicieran de los capitanes y pilotos mercantes, que se distinguieren notablemente en sus mandos, por combates navales, por aciertos particulares de sus navegaciones, por lo que contribuyeran á los adelantamientos de la hidrografía, ó por otros servicios distinguidos en su carrera, á fin de hacer saber á los primeros sus faltas para que se corrijan, y dar cuantas órdenes juzguen oportunas á los comandantes generales de los arsenales de los departamentos, quienes, para los presupuestos, obras, contratas, cuentas, estados de

efectos y buques, y cuanto á aquellos establecimientos perteneciera, debian entenderse con el Almirantazgo, quien en vista de todos estos datos, habia de formar y publicar la cuenta corriente del año económico.

Informaba, en fin, al Gobierno, sobre el sistema administrativo de la armada, en todas sus partes, y proponia los reglamentos de pertrechos, efectos, armamentos y provision de los buques de guerra, las mejoras factibles en su artillería, arboladuras, aparejos, y generalmente sobre cuanto pudiese contribuir á que la marina de guerra española se pusiese al nivel de la de las demás naciones.

Por la cesacion por entonces del régimen constitucional, cesó en 6 de Diciembre de 1823 la Junta del Almirantazgo, y se restableció nuevamente la *Direccion general de la armada*, en los mismos términos, en que se verificó por Real órden de 3 de Enero de 1796, y que despues, en 1830, se llamó *Junta superior del gobierno de la armada*, cuyas atribuciones eran, segun el reglamento de 21 de Enero «informar con verdad, rectitud y pureza sobre lo que de órden de S. M. se le previniese, y proponer cuantas medidas creyese importantes para el real servicio; y para no carecer de las noticias interesantes sobre hechos y ocurrencias de mar, ni de la instruccion indispensable acerca de los nuevos adelantamientos é inventos de la ciencia naval, por el Ministerio se costearian uno ó dos periódicos nacionales y estranjeros de los que mejor pudiesen llenar este objeto.»

Sin embargo, estimándose, como uno de los obstáculos para la prosperidad de la marina, su forma de gobierno, en 5 de Febrero de 1834, se suprimió la *Direccion general* y se creó la *Junta superior de gobierno y administracion económica de la armada*, reunido el mando superior de ella en dicho cuerpo, por un capitan general de la misma, que diese el mas acertado impulso á todas las operaciones, vigilase el cumplimiento y observancia de las leyes orgánicas y propusiere lo que despues de un muy maduro exámen considerase susceptible de mejora. En su razon se suprimieron los empleos de director y mayor general de la armada, así como la *Junta de gobierno*, creando en su lugar un cuerpo deliberante, con dicha denominacion de *Real Junta superior de gobierno y administracion económica de la armada*, que además de las atribuciones peculiares á aquellos empleos suprimidos, conociese en el gobierno y direccion de todos los ramos, que constituyen la armada, escepto los judiciales, que debian subsistir conforme estaban, y que, suprimido el Consejo de Guerra, por Real decreto de 24 de Marzo de 1834, pasaron al *Tribunal supremo de Guerra y Marina*, creado por el mismo.

En 1835, se suprimió la *Junta superior de gobierno de la armada*, quedando radicadas todas sus atribuciones gubernativas y de administracion económica en la secretaría del despacho, en el que se llamó *Consejo de marina*, compuesto del subsecretario, y cuatro jefes de seccion, y desempeñando la parte consultiva la seccion de marina del Consejo Real (Real decreto de 28 de Noviembre de 1835). Como consecuencia de esta agregacion, se dividió la antedicha secretaría en dos secciones, una denominada de marina, para los asuntos de este ramo, y otra llamada de comercio y Ultramar, que comprendia estos dos negociados.

Todavía en 28 del mismo, declarando suprimido el *Consejo de marina*, fué creada la *Junta del Almirantazgo*.

Así llegaron las cosas á 1842, en que por decreto de la regencia, de 16 de Febrero, quedó modificada esta Junta, limitando sus atribuciones á la inspeccion de la parte personal, material y científica de la marina, y á ilustrar al Gobierno informando, al año y medio, en 10 de Agosto de 1843, se creyeron perjudiciales las reformas planteadas; se restableció la *Direccion general de la armada*, estinguiéndose la Junta de Almirantazgo; se designó como director general de la armada, al capitan general de la misma; se estableció la *junta de asistencia de jefes*, encargándose á uno la parte facultativa, con la revision de las Ordenanzas generales; á otro, la inspeccion de los arsenales, con la direccion de los cuerpos de ingenieros hidráulicos y construc-

tores; á otro la inspeccion de matrículas, con todas sus incidencias; á un brigadier mayor general la inspeccion del cuerpo de artillería de marina, y al intendente general, como jefe superior del cuerpo administrativo, la inspeccion de la contabilidad.

En 18 se Setiembre de 1844 se mudó el nombre de *junta de asistencia* en el de *junta de direccion de la armada naval*, presidida por el director general de ella, con número indeterminado de vocales, y del mayor general, como vocal nato. Las atribuciones de esta junta eran informar al Gobierno sobre los asuntos de que la pidiese parecer, proponiendo cuantas medidas juzgase útiles para remediar abusos ó alcanzar mejoras. El Gobierno no podia celebrar contratos, sopena de nulidad sin su intervencion; ni alterar el sistema que fijan las Ordenanzas y reglamentos de la armada, ni resolver las materias facultativas de cualquiera clase que fuesen, sin oirla préviamente, quedando á su cargo las propuestas para todos los empleos, escepto los mandos generales que los podia conceder el Gobierno sin oirla, y los mandos particulares en aquellos casos, en que lo considerase conveniente al mejor servicio.

En 23 de Febrero de 1848 quedó suprimida esta junta directiva y consultiva, restableciéndose la *Direccion general*, que se confirió al capitan general de la armada, radicando luego en él la jurisdiccion absoluta de todos los ramos del servicio de la marina, sin distincion entre la militar y administrativa (decreto de 28 de Abril de 1852).

Por Real decreto de 6 de Setiembre de 1855 se creó el *Almirantazgo ó Junta de Almirantazgo*, declarando que le correspondia formular planes en defensa de las costas, operaciones de escuadras y buques sueltos, escoltas, cruceros y demás operaciones militares y facultativas; proponer empleados y medidas para fomentar y mejorar la marina de guerra y mercante; entender en la inversion de fondos, presupuestos de obras, presupuesto de marina y cuanto era concerniente á la parte administrativa y consultiva, derogándose todas las disposiciones legales, relativas á la existencia de la direccion general, mayoría general, junta consultiva de la armada, direcciones generales de ingenieros de la armada, y de artillería é infantería de marina, y mandando cesase en sus funciones la direccion y la intervencion central de contabilidad de la armada, desde el dia en que se constituyese el Almirantazgo, que, segun otro Real decreto de 7 del mismo, debia ser lo mas pronto posible.

Pero por decreto de 7 de Noviembre de 1856, restablecióse la *direccion* y *mayoría generales de la armada*, quedando vigentes los reglamentos y disposiciones relativas á aquella, y que lo estaban al tiempo de crearse el Almirantazgo.

Deseando conciliar la unidad de accion con la multiplicidad de atribuciones, en 11 de Noviembre de 1857, volvió á suprimirse la *direccion general de la armada*, resumiendo el Ministro las facultades y atribuciones de todas las dependencias suprimidas y creando á sus inmediatas órdenes una *junta directiva del ministerio de marina* y otra *junta consultiva de la armada*, con varias direcciones. El capitan general de la armada podia presidir la última cuando lo juzgara conveniente, é inspeccionar en los mismos términos todos los cuerpos, buques, arsenales é institutos de la armada. A la junta consultiva, compuesta al principio de un presidente y dos vocales, oficiales generales de marina, y del director de ingenieros del ramo cuando fuese oficial general, aumentada despues (Real decreto de 6 de Marzo de 1861) con dos brigadieres de la escala activa de la armada, competia clasificar anualmente á los oficiales de la misma, proponerlos en terna para mandos y destinos, desde alférez graduado de fragata hasta brigadier inclusive, calificar los espedientes sobre asuntos que no fuesen de rigorosa escala, examinar las quejas que se elevasen y los diarios de navegacion, emitir dictámenes sobre ascensos consultados, autorizar las subastas públicas, que se convocasen para toda clase de servicios y la adjudicacion provisional de los remates.

Así llegaron las cosas á 1868, en que fueron suprimidos, la *junta consultiva de la armada* (decreto de 12 de Octubre), y los

centros administrativos de la armada (id. 20 del mismo Octubre). Y por decreto de la propia fecha, se creó la *junta provisional de gobierno de la armada*, compuesta del Ministro de Marina, un general, vicepresidente, cinco brigadieres, ó capitanes de navío, un coronel de estado mayor de artillería de la armada, un capitan de ingenieros del arma, un comisario de primera clase y dos secretarios.

En 4 de Febrero, en fin, de 1869, «para el gobierno, mando, y administracion de todos los cuerpos, establecimientos y ramos de la armada, se creó un centro, gubernativo y administrativo, denominado *Almirantazgo*, «compuesto del Ministro de Marina y de cuatro comisarios (art. 1.° del decreto).»

Corresponde al Almirantazgo, en cuerpo, el tratamiento y honores de almirante, y el uso de una insignia especial (art. 2).

Tres de los comisarios serán de la clase de almirantes; y el cuarto diputado á Córtes (art. 6).

El Almirantazgo tendrá las dependencias siguientes:

Secretaría.

Seccion del personal.

De arsenales, armamentos y espediciones.

De marinería.

De construcciones.

De artillería.

De tropas de marina.

De contabilidad.

De sanidad.

De hidrografía y establecimientos científicos (art. 16).

Por el mismo decreto se crea un *Tribunal del Almirantazgo*, que se compondrá de un presidente, un vicepresidente, cuatro ministros y un fiscal, militares; un ministro y un fiscal, togados; un secretario, y un ministro togado suplente (art. 75).

Será presidente el almirante, que sea de la armada, y si hubiere más de uno, el más antíguo (art. 75).

El ministro togado será asesor del almirantazgo (art. 86).

El Almirantazgo despachará en pleno y en salas, dividiéndose en dos de estas (artículos 88 y 89).

El tribunal del almirantazgo conoce, de las causas de sus individuos, por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones, ó por delitos comunes, que no sean de los esceptuados en el decreto de 6 de Diciembre de 1868, sobre *unidad de fueros*.

De las causas contra oficiales de la clase de almirantes, en igual forma, y de las de auditores de departamentos y escuadras.

De las de oficiales é individuos de marina de todas clases, que no pertenezcan á cuerpos militares, ó que se hallen separados de éstos, en uso de licencia, y entendiéndose por delitos de cualquier clase, que cometan, en Madrid, ó dentro de un rádio de 100 kilómetros, siempre con la escepcion arriba indicada.

En grado de revision, cuando proceda, de todas las causas, á que se refieren los párrafos anteriores.

En grado de revision ó de consulta, con arreglo á las leyes y Ordenanzas, de los delitos militares y comunes, sujetos á los consejos de guerra, tribunales de marina, capitanes ó comandantes generales de departamento, apostaderos y escuadras, y comandantes de provincia, divisiones y buques sueltos, ú otros jefes militares.

Y de las sumarias, que se formen de órden de los comandantes ó jefes de cuerpos militares de la armada, para corregir gubernativamente á sus oficiales, por faltas graves en el servicio.

Además de lo dicho, le compete el formular el cargo correspondiente á los vocales de los consejos de guerra y oficiales generales, que se separen, en sus votos, de lo mandado por las leyes ó la Ordenanza.

Conoce además en grado de apelacion, revision ó de consulta, de las causas de presas de buques enemigos, contrabando de guerra, represalias, y de buques náufragos, encontrados en la mar, ó abandonados en nuestras costas.

Dirime las competencias de jurisdiccion ó atribuciones, entre los tribunales y autoridades de marina, que no reconozcan un superior comun.

Resuelve las dudas, consultadas por los

capitanes ó comandantes generales de departamentos, apostaderos ó escuadras, ó sus auditores, sobre la inteligencia de alguna ley penal ó de procedimiento.

Y últimamente, de los recursos por denegacion de indultos ó amnistías, cuya aplicacion corresponda á tribunales, gefes, ó autoridades de marina (art. 100).

El tribunal del almirantazgo, se regirá interiormente por un reglamento, que someterá á la aprobacion del Gobierno (art. 102).

Volvemos á repetir que en todo ha de tenerse presente la posterior unificacion de fueros. Véase FUEROS (*Unificacion de*).

CONSEJO DE ARAGON. Antes de la incorporacion de Aragon á Castilla, sus Reyes tenian, sin duda, cerca de sí, como todo sumo imperante, un conjunto de hombres de consejo, y á veces de derecho, que podria denominarse de uno y otro modo, pero que en suma era un consejo. Así, segun la historia de aquel reino, cuando su rey Don Pedro IV partió para la conquista de Mallorca, llevó consigo cuatro jurisconsultos *de su consejo* (Zurita, *Anales de Aragon*, libro 7.°, cap. 67).

Pero no hablamos de ese consejo; sino del creado por los Reyes Católicos, y que con esa denominacion, figura, con nota y prestigio, entre los demás Consejos supremos de la Corona de Castilla.

Antes de su creacion, D. Fernando el Católico, habiendo sucedido en Aragon á su padre D. Juan II en 1479, y siguiendo sin duda las prácticas de aquella corona, tenia instalados en su palacio, segun los cronistas, hombres de consejo, naturales de Aragon, de Valencia y de Sicilia, que instruidos en los fueros respectivos, le daban en ello el suyo, cuando lo necesitaba.

Así corrieron las cosas, hasta que en union de la Reina Católica, en 1494, por cédula en Madrid, creó el Consejo de Aragon, dándole oportunas y detalladas ordenanzas para su régimen.

Cárlos V las modificó, dejándole el privativo conocimiento de los negocios de Aragon, Cataluña, Valencia y Baleares, y segregando las de los dominios de Italia, para cuyo régimen se estableció otro Consejo. Felipe II, y Felipe III introdujeron tambien algunas modificaciones. Felipe IV dió al Consejo nuevas y estensas ordenanzas, con las que se gobernó hasta que Felipe V, en 1707, suprimiendo los fueros de Aragon y de Valencia, suprimió el Consejo supremo de Aragon, agregando sus negocios al de Castilla, y Cámara de Castilla; los del reino de Cerdeña, en atencion á ser ultramarino, y los de Menorca y Mallorca, cuando esta fuera recuperada, al Consejo de Italia; y los de la orden de Montesa, al Consejo de las Ordenes (leyes 1.ª, tít. 3.°, lib. 3.°, y 9, tít. 3.°, lib. 4.° Nov. Recop.).

Componíase el Consejo, de presidente, vicecanciller y tesorero general: seis llamados *regentes*, dos naturales de Aragon, dos de Valencia y dos de Cataluña: un fiscal, protonotario y cuatro secretarios. En los asuntos de gracia, suplia al presidente en ausencias y enfermedades, el tesorero general: en los de justicia, el regente mas antiguo.

Venian en apelacion al Consejo los asuntos contenciosos de la corona de Aragon; salvo los de Valencia, si bien de allí venian algunos, *causa recognoscendi*, ó como los recursos de *Mil* y *Quinientas* en lo de Castilla.

Eran, en fin, de la competencia del Consejo, los asuntos de justicia de aquella corona, como queda dicho, los de gobierno, hacienda, guerra, marina, patronato eclesiástico, y aun la provision de algunos cargos eclesiásticos y temporales.

El nombramiento de regentes de cada uno de los tres reinos, de Aragon Valencia y Cataluña, que era conveniente para el mejor conocimiento de los fueros respectivos, en la práctica resultó perjudicial para la mas justa y acertada provision de destinos, achacándose, que los regentes deferian entre sí, en sus empeños peculiares, en perjuicio de la justicia; lo que dió lugar á quejas y reclamaciones, que en tiempo de Felipe IV hizo pensar en reducir ese punto á las leyes de Castilla.

Todos los cargos y destinos, en fin, habian de proveerse en naturales de aquella corona, escepto los de virey, y los arzobispados de Zaragoza y Valencia.

Sobre el archivo del Consejo y destino de sus papeles, de los cuales en 1748 se llevaron 50 cajones al archivo de Simancas, véase á Riol, en su informe sobre archivos.

CONSEJO DE CASTILLA. Dijose tambien *Real Consejo de Castilla*. Ha habido en España, en los últimos tiempos, un Consejo Supremo, denominado simplemente *Consejo Real*, como decimos en su artículo; pero hemos notado que, en su orígen, la mayor parte de los consejos, que fueron creándose, aunque supremos, llevaban la denominacion de Real, como *Real Consejo de Indias*, *Real Consejo de las Ordenes*, etc.

No es menos cierto, como decimos en el artículo **CONSEJO** (*como institucion*), que nuestros monarcas, ya desde la Monarquía goda, han tenido cerca de su persona un centro de elevados patricios, para ilustrarse con su consejo y asegurar sus resoluciones; y como éstas, en la complicada gobernacion de sus Reinos, no ya en un estado de guerra secular, sino aun de paz, habian de alcanzar á todos los órdenes de la gobernacion, en lo consultivo, directivo, económico y judicial, este centro fué un consejo, que así se dibuja desde luego con sus caractéres naturales, sin que despues lo desmientan la legislacion, ni la historia.

Este consejo, coetáneo de la Monarquía é inherente á ella, pudo muy bien llamarse Consejo de Estado, y no de Castilla desde luego; pues existió, antes que Castilla alcanzase su autonomía soberana. Pero la llegó á alcanzar, tan realzada y gloriosa, que dominaba á toda otra en el órden político; y por una razon natural entonces, así como su denominacion abarcaba todo el reino, así tambien por antonomasia el Consejo del Rey se denominó, con mucha propiedad, de Castilla. Hasta entonces una cosa era cierta, y es que el Consejo lo era del Rey, y se comprende que ya entonces, como despues, se denominase, radicalmente, y no obstante cualquier otra denominacion específica, *Real Consejo* ó *Consejo Real*, como ya dejamos sentado.

Pero, este Consejo del Rey, y por ello, en su cualidad de supremo, no teniendo otro sobre sí, Consejo tambien de Estado, ¿cuándo tomó el nombre antonomástico de *Consejo de Castilla*? Sobre ello, y sobre cuanto sumariamente queda dicho, es muy larga y debatida la cuestion entre los autores. (Pueden consultarse, al efecto, á Gil Gonzalez, *Teatro de las grandezas de Madrid*; Navarrete, *Conservacion de Monarquías*; Gonzalez Salcedo, *Teatro honorario*; García Martrillo, *De magistrat.*; Silva, *Catálogo Real*; Cárlos Benitez, *Escrutinio de monedas*, y Salazar, *Memorias y noticias del gobierno político del Consejo*). Pretenden unos que el Consejo de Castilla debió su organizacion, y tal vez su denominacion, al Santo Rey D. Fernando; otros que al Rey D. Juan el I. Y como sea verdad que desde esos reinados data la forma y organizacion gubernativa y judicial, con que en sus mejores tiempos ha sido conocido, ese es el punto de vista de la ENCICLOPEDIA, y desde ahí lo toma para su fin, debiendo aun verse lo que mencionamos en el citado artículo **CONSEJO** (*como institucion*).

Es, pues indudable que, hasta la época inmediata á la de San Fernando, mantuvieron los Reyes, durante la restauracion, aunque con la irregularidad consiguiente en algunas ocasiones, las leyes y el Consejo del período visigodo; si bien daban á sus individuos los títulos de *senniores*, *primates*, *príncipes*, *magnates*, *optimates*, *honoratos* y alguna vez el de *alcaldes*, que indistintamente venian á significar lo mismo que *jueces* en su mas lata acepcion, y que parece empezó á usarse desde el reinado de Doña Urraca y concilio de Peñafiel, en 1137. En esta acepcion la vemos empleada en las leyes del Estilo, en el Fuero Real y en las Partidas (ley 2.ª, tít. 1.º, Part. 7.ª).

Antes de la época de San Fernando se acostumbraba comunmente llamar *oidores*, á los del supremo Consejo, que asistian con el Rey á la audiencia y despacho de los negocios, reservados á su soberanía. En las leyes del Estilo (ley 22) se llama *oidores* á los jueces de los recursos de alzadas, á quienes tambien las de Partida (ley 110, tít. 18, Partida 3.ª) titulan *juzgadores* y *oidores*. Don Alfonso XI reputa por una misma cosa su *Con-*

sejo ó Audiencia (ley 34, tít. 3.°, lib. 2.°, Ordenanzas R. de C.).

La organizacion del Consejo y sus atribuciones, durante los reinados de San Fernando y Alonso IX, son desconocidas, limitándose el Fuero Real (leyes 1.° y 2.°, tít. 7.°) á mandar que los alcaldes jurasen su cargo en el Consejo, prohibiéndoles nombrar sustitutos, sino por mandato del mismo ó del Rey; pero su importancia era mucha indudablemente, supuesto que se le consultaban las leyes, segun consta en el proemio del Fuero Real, para cuya promulgacion, dice Alonso IX, «hovimos consejo con nuestra Corte, é con los sabidores del derecho.»

Don Alfonso en Madrid, D. Juan en Burgos y Alcalá y los Reyes Católicos en Toledo (ley 1.°, tít. 1.°, lib. 2.°, Ord. RR. de C.) dispusieron «entrar en el nuestro Consejo de la justicia el viernes de cada semana,» y que se leyesen y proveyesen las quejas y peticiones de fuerza y de negocios árduos; cuya disposicion concuerda con la ley 5.°, tít. 5.°, Partida 2.°, en la cual se ordena que el Rey debe vestir «muy apuestamente» para ser conocido de los que vayan «á pedirle merced.» Y no solo en su palacio debia administrar justicia: «su propio oficio es hacer juicio y justicia, porque de la celestial majestad recive el poderío temporal» (dicha ley 1.°); sino recorrer tambien con este objeto las ciudades, villas y lugares «con el su Consejo y alcaldes y los otros oficiales» (ley 3.° id.); correspondiéndole, segun declaró D. Juan I en Segovia, invocando la antigua costumbre observada en Castilla, el conocer y proveer acerca de las injurias, violencias y fuerzas entre prelados y clérigos, sobre iglesias y beneficios (ley 5.° del tít. y lib. citados de las OO. RR.).

Enrique II, en las Córtes de Burgos, era de 1406, mandó que fuesen de su Consejo doce hombres buenos, dos de cada uno de los reinos de Leon, Galicia, Castilla, Toledo, Estremadura y Andalucía (1). Los Reyes Católicos en Toledo ordenaron que residiesen en el Consejo un prelado, tres caballeros y hasta ocho ó nueve letrados (1); y Felipe II determinó que se compusiere el Consejo, para la administracion de justicia y gobierno de los reinos, de un presidente y diez y seis letrados (ley 1.°, tít. 3.°, libro 4.°, Novísima Rec.).

En esta forma continuó el Consejo, hasta que Felipe III por su cédula de 30 de Enero de 1608 (ley 6.°, tít. 5.°, id.) decretó que, para los asuntos de gobierno, se formase una sala, compuesta de cinco consejeros, además del presidente, con facultades para hacer entender y cumplir lo establecido por el Concilio de Trento, y amparar á los monasterios y á los prelados para su observancia; encargándole tambien á dicha sala la conservacion de los hospitales y ereccion de seminarios, el gobierno de las universidades, de los montes, plantíos y pósitos del reino, la restauracion del comercio y de la agricultura, la vigilancia sobre los corregidores y jueces ordinarios y otros varios asuntos de distinta índole, además de las competencias entre tribunales; si bien se aclaró posteriormente este estremo, acordándose que para las competencias se acudiera á las salas de justicia (Auto 15, tít. 4.°, lib. 2.°, Recop.).

A la de gobierno habia el fiscal de dar cuenta semanalmente de los negocios de su cargo, como antes la daba al Consejo, conforme á las ordenanzas hechas en la Coruña en 1554.

Los once consejeros restantes mandó Felipe III que se dividiesen en tres salas: una llamada de *Mil y Quinientas*, compuesta de cinco ministros, que habia de entender en los negocios públicos, que requirie-

(1) En la respuesta á la peticion de los citadas Córtes de Burgos, era de 1406 ó año 1367, dijo el Monarca: «e tenemos por bien de los demandar, e á cada uno de ellos (los consejeros) por su salario de cada anno ocho mil maravedis; e todavía cataremos en que les fagamos merced, de manera que ellos pasen bien.»

(1) Fueron estos el reverendo padre D. Garci Lopez de Padilla, Clavero de Calatrava; Garci Fernandez Manrique, D. Sancho de Castilla; Garci Franco de Toledo; los doctores Micer Alfonso de la Cavallería, Micer Aguilar, Juan Diaz de Alcocer, Andrés de Villalon, Anton Rodriguez de Lilio, Ramirez de Zamora, y los licenciados Pero Fernandez de Vadillo y Alfonso Sanchez de Logroño. (Véase el *prólogo* del tít. 3.°, libro 2.° de las Ordenanzas Reales de C.)

sen pronto despacho, en los de mil y quinientas y en los de residencias; y dos de justicia, con tres ministros cada una, para los demás asuntos.

Con fecha 22 de Agosto de 1621 el gobernador del Consejo consultó á S. M. la conveniencia de formar dos salas de gobierno, á fin de poder despachar la multitud de negocios que solian aglomerarse; y así se acordó, determinándose que los mas importantes se viesen en sala primera, y los graves y de interés general en sala tercera.

Cárlos II, á 17 de Julio de 1691, y Felipe V, á 6 de Marzo de 1701, resolvieron (ley 3.ª, tít. 3.º, lib. 4.º de la Nov. Rec.) que fuese fijo el número de veinte oidores y el fiscal, además del gobernador ó presidente del consejo (primera parte del auto 50, tít. 4.º, libro 2.º, Rec.). Por decreto de 10 de Noviembre de 1713 reformó el mismo Felipe V la planta ú organizacion personal del Consejo, disponiendo que se compusiera de cinco presidentes, con iguales autoridad, manejo é independencia entre sí, aunque con la diferencia de su antigüedad respectiva, y que cada uno usase el título de primer presidente. Se nombraron veinticuatro consejeros, aumentándose su número, y un fiscal general, dos abogados generales, dos sustitutos del fiscal y cuatro secretarios en jefe: y se formaron cinco salas con los títulos de la sala primera de gobierno, sala segunda de gobierno, sala de justicia, sala de provincia y Sala del crímen.

Las dos de gobierno se componian de los cinco presidentes y seis consejeros, el fiscal general, los dos abogados generales y los cuatro secretarios en jefe, dividiéndose en las dos salas, segun lo requerian el número é importancia de los negocios. La sala de justicia constaba de dos de los cinco presidentes, nueve consejeros, un abogado general y un secretario jefe. Formaban la sala de provincia dos presidentes, nueve consejeros, el otro abogado general y un secretario jefe. Y constituian la sala del crímen tres de los cinco presidentes, los diez y ocho consejeros que formaban las de justicia y provincia, el fiscal general, los dos abogados generales y un secretario en jefe.

Respecto á la sala de Alcaldes de Córte, se mandó tambien que la compusieran tres presidentes, diez y ocho alcaldes, un fiscal, dos abogados reales, dos sustitutos de fiscal y cuatro secretarios en jefe; y que los alcaldes alternasen de seis en seis meses, conforme fuesen nombrados por S. M., una mitad para las materias civiles y la otra para las criminales, escepto el fiscal, sus sustitutos y los dos abogados reales.

No duró mucho esta organizacion del Consejo, pues el mismo Felipe V, á 9 de Junio de 1715 (ley 4.ª, tít. 3.º, lib. 4.º, Nov. Rec.), derogó el decreto que á 17 de Julio de 1691, habia espedido Cárlos II, los suyos propios de 6 de Marzo de 1701 y 10 de Noviembre de 1713, y las declaraciones hechas en 1.º de Mayo y 16 de Diciembre de 1714, anulando la institucion de los cinco presidentes, la del fiscal general y de los abogados reales, y restituyendo á su primer instituto el cargo de presidente ó gobernador del consejo de Castilla, con todas las preeminencias, prerogativas y honores, que tenia, y que no fuesen contrarios á las leyes del Reino. Suprimió además Felipe V las plazas supernumerarias, y mandó que no hubiese mas que veintidos consejeros, aunque se aumentó este número con el de cinco, por Real decreto de 9 de Agosto de 1766, y consignándose por entonces su dotacion en el sobrante del fondo y caudal del dos por ciento de los propios y arbitrios de los pueblos.

Conforme al citado decreto de 9 de Junio de 1715, quedó el Consejo organizado en esta forma: ocho ministros, además del presidente ó gobernador, en sala de gobierno; cuatro en sala de justicia; otros cuatro en la de provincia; cinco en la de Mil y Quinientas, y uno en la presidencia de la de alcaldes; y si en las de justicia, provincia y Mil y Quinientas faltase alguno de los ministros, se habia de suplir con uno de la de gobierno; la cual se dividiria en dos cuando hubiese muchos negocios, para su mas pronto despacho, segun antes se acostumbraba. Por último, se nombraron dos fiscales, uno para lo civil, y otro para lo criminal y para los negocios concernien-

tes á la Corona de Aragon, Valencia y Cataluña (1).

Respecto á la sala de Alcaldes, se le restituyó por decreto de 22 de Junio del mismo año 1715 su jurisdiccion antigua, y toda la autoridad que ejercia antes de la nueva planta, de 10 de Noviembre de 1713; y se mandó que constara de un ministro del Consejo de Castilla, que la presidiera, con el título de gobernador, de doce alcaldes con la calidad de por ahora, un fiscal, cuatro escribanos de cámara del crímen, dos relatores, un agente fiscal, un abogado, un procurador de pobres, y el mismo número de escribanos de provincia que tenia; con la condicion de que se suprimiesen las tres plazas de alcalde que primero vacasen, para que quedaran reducidos al número de nueve.

El Consejo de Castilla tenia facultades tan ámplias en el órden judicial, económico, administrativo y gubernativo, que á toda clase de negocios alcanzaban su jurisdiccion y competencia; correspondiendo conocer en ellos al Consejo pleno ó á cada una de sus salas respectivamente, segun la naturaleza é importancia de los mismos, en la siguiente forma.

Consejo pleno. En él se despachaban los negocios é instancias sobre fundaciones de conventos, hospitales, hospicios, seminarios, y lo tocante á redencion de cautivos: se votaban y acordaban las consultas sobre provision de cátedras en las universidades: se examinaban los breves que servian de título á los Nuncios de la Sede Apostólica, poniéndoles el pase, con arreglo á los concordatos y á las leyes civiles: se resolvia sobre las recusaciones de los ministros del Consejo: se veian los recursos de fuerza en negocios del Real patronato (ley 14, tít. 2.°, lib. 2.°, Nov. Rec.): se despachaba todo lo relativo al Concilio de Trento, á la publicacion de paces y pragmáticas, á las cuestiones de imprenta, á las visitas de cárceles: se resolvian todos los negocios que le enviaba S. M., para que *consultase* sobre los mismos, como igualmente las dudas que manifestaban los ministros del propio Consejo en ciertos asuntos, y los que, segun su prudencia, consideraba oportuno el presidente ó gobernador del mismo someter á su deliberacion; siendo, por último, de la incumbencia del Consejo pleno (ley 9, tít. 23, libro 7, id.) el conceder ó negar permiso para roturar, labrar y sembrar terrenos, cuyas licencias no podia otorgar sino en caso necesario y de utilidad pública, prévio dictámen del procurador general del Reino, concurriendo para ello dos terceras partes de los ministros del Consejo, y consultándolo con S. M. Esta disposicion fué confirmada por decretos de 30 de Diciembre de 1748 y 20 de Noviembre de 1762, disponiéndose por el último que los espedientes sobre roturaciones se pasaran al *juez de rompimientos*, y además al procurador general del Reino.

Tambien correspondian al Consejo pleno otros negocios, que por decreto de 9 de Julio de 1715 estaba mandado que *se consultasen* con S. M., á saber: las licencias para pedir limosna y sus prórrogas: las vénias que solicitaban los menores de veinte y cinco años para administrar sus bienes: las facultades que los pueblos debian obtener para hacer derramas con el objeto de pagar al médico, al cirujano, al maestro de escuela, los acotamientos, los pleitos del municipio y otras atenciones de interés público: los permisos para talas y entresacas de madera en los montes: las residencias de corregidores y alcaldes mayores realengos: las licencias para imposicion de censos sobre los propios y arbitrios de los pueblos, para plantacion de viñas en tierras de labor ó de pasto, para vender jurisdicciones, términos, dehesas y otros bienes comunes: para redimir censos: para los gastos de canonizacion de santos y otros fines espirituales: para construir puentes y calzadas, reedificar casas de niños espósitos, mantenerlos y vestirlos á costa de propios y arbitrios: para imponerlos sobre abastos de

(1) Antiguamente el de Castilla y los demás consejos residian en el Real palacio; pero en 1717 mandó Felipe V que se estableciesen en la casa llamada de los Consejos, antiguo palacio donde habitó la Reina doña María Ana de Austria, propio del duque de Uceda, frente á la iglesia parroquial de Santa María de la Almudena, derribada en 1869.

todas especies, con objeto de fabricar ó reconstruir iglesias, conventos, cuarteles, molinos de agua ó de viento, casas municipales, ferrerías y otros edificios públicos.

Además se dispuso por decreto de 14 de Setiembre de 1742, que se consultasen tambien todos los pleitos en que por lo general se tratara de incorporar ó revertir á la Corona cualquier estado, ciudad ó villa, antes de publicar la sentencia, que dictase el Consejo pleno.

Sala primera de gobierno. Esta debia juzgar sobre los recursos de fuerza en conocer y proceder los jueces eclesiásticos de la córte en perjuicio de la jurisdiccion Real, y sobre las que dimanaran de los negocios pertenecientes á millones (ley 15, tít. 2.°, lib. 2.°, Nov. Rec.) Antiguamente estaba dispuesto (auto 71, núm. 13, tít. 4.°, lib. 2.°, Rec.) que asistiesen á la vista y fallo de estos negocios los ministros de las salas primera y segunda de gobierno, y los que componian la de Mil y Quinientas; pero á consulta del Consejo de 24 de Marzo de 1756 se mandó que asistieran únicamente los ministros de las salas de gobierno.

A la primera de estas le correspondia tambien el conocimiento de los recursos de fuerza de los jueces eclesiásticos de Alcalá de Henares y su vicario; las que introdujeran el contador de rentas decimales, los alcaldes de Córte, los jueces de comision de la córte, cuyas apelaciones estaban reservadas al Consejo; las del tribunal de la asamblea y las del Patriarca de las Indias. Los recursos de fuerza en conocer y proceder, en el modo, y subsidiariamente en no otorgar las apelaciones el Nuncio de su Santidad, el vicario, el visitador y los jueces eclesiásticos de la córte, el contador de rentas decimales y el rector y el vicario de Alcalá de Henares, competian á la sala segunda de gobierno; y aunque la primera espedia algunas veces provisiones ordinarias para la remision de autos, la segunda era la que determinaba sobre ellos.

Tocábale además á dicha sala primera de gobierno el conocimiento de todo lo concerniente á la conservacion de seminarios y hospitales, régimen de universidades, observancia de los aranceles de tribunales reales y eclesiásticos, fomento de la agricultura, cria de ganados y conservacion y aumento de los montes y plantíos; corriendo este último negociado á cargo de dos ministros del Consejo, con señalamiento y division de territorios, poblaciones y partidos, uno en los que comprendia el distrito de veinticinco leguas en contorno de la córte, y el otro en las demás provincias y pueblos del reino, debiendo ambos respectivamente celar por el cumplimiento de la Real ordenanza que, sobre esta materia, se habia publicado en 7 de Diciembre de 1748. Véase **MONTES: PLANTIOS.**

Correspondia igualmente á sala primera todo lo relativo á la reparacion de caminos y puertos, y al gobierno económico de Madrid, aprobando los acuerdos de su ayuntamiento (ley 4.°, tít. 35, lib. 7.°, Nov. Rec.); como tambien el despachar provisiones para que las justicias de los pueblos hiciesen matar la langosta, y para que se guardasen á los hijos-dalgo los debidos privilegios y consideraciones (leyes 5.°, tít. 31, lib. 7.°, y 14, tít. 2.°, libro 6.°, id.). En lo antiguo conocia además en lo relativo á los pósitos y á la provision de abastos (ley 62, cap. 3.° y 6.°, lib. 2.°, Rec.). Asimismo le correspondia conocer de las querellas y demandas de capítulos, en que se pedian jueces de comision (id. cap. 7.°); dictar providencias sobre prision y castigo de gitanos, bandidos y salteadores (autos 3 y 7, capítulo 3.°, lib. 8.°, tít. 11, Recop.); conceder licencia á los menores de veinticinco años para administrar sus bienes (parte 2.°, auto 34, tít. 19, lib. 2.°, id.); otorgar permisos para imprimir libros; conceder ó negar esperas y moratorias: despachar los negocios sobre redencion de cautivos, y los recursos de queja contra las Audiencias y Chancillerías: facultar á los pueblos para la enagenacion de sus propios, y para la imposicion de gravámenes sobre los mismos, y espedir provisiones sobre apeos, deslindes y amojonamientos, y sobre esportacion de granos y otros efectos: proveer las curadurías de los grandes de España: librar despachos sobre la observancia de pragmáticas, conservacion de archivos, cesantía de las justicias de los lugares de señ-

rio, cumplido que fuera el tiempo de su nombramiento, y sobre otros asuntos de distinta índole: conocer en lo concerniente á los capítulos de religiosos, aunque en los casos árduos tomaba conocimiento el Consejo pleno, y en otra multitud de negocios y materias diversas, que seria muy prolijo enumerar. Es notable, sin embargo, la circunstancia de estar prevenido y mandado (ley 1.ª, tít. 5.º, lib. 4.º, Nov. Rec.) que los ministros del Consejo tuvieran poder y jurisdiccion para conocer de todos los negocios civiles ó criminales; y así lo practicaban, por atencion, algunas veces los de la sala primera de gobierno, cuando les parecia que de este modo ahorraban los litigantes ciertos gastos, indispensables si hubieran de recurrir á las Chancillerías y Audiencias.

Sala segunda de gobierno. En ésta se sustanciaban y determinaban pleitos, que, debiendo ser remitidos segun las leyes á las Chancillerías y Audiencias (leyes 1.ª y 2.ª, tít. 6.º, id.), pasaban al Consejo, por virtud de su acuerdo de 18 de Enero de 1747, cuando aquellos radicaban en pueblos situados dentro del rádio de cinco leguas de la córte; y asimismo los que venian en apelacion de los reinos de Sevilla y Valencia. Las esperas y moratorias de gracia se despachaban en ella tambien; hasta que en 18 de Enero de 1747 se dispuso, y nuevamente en 8 de Mayo de 1751 se mandó, que de estos negocios se diera cuenta en sala primera. Estinguida en 18 de Setiembre de 1747 la junta, que por decreto de 3 de Octubre de 1738, habia establecido Felipe V, para que conociese sobre términos y baldíos de los pueblos, se mandó que todas las reclamaciones sobre esta materia se sustanciaran y fallaran en dicha sala segunda, que estaba facultada para proceder gubernativamente en todas las incidencias que pudieran surgir entre los pueblos y los particulares.

En ella se determinaban los recursos de fuerza, que se introducian en conocer y proceder, en el modo, y subsidiariamente en no otorgar las apelaciones del Nuncio de Su Santidad, vicario, visitador, y demás jueces eclesiásticos de la Córte, las del rector y vicario de Alcalá de Henares, y las del contador de rentas decimales; pues si bien, como hemos dicho, se elevaban á la sala primera estos recursos, luego que se recibian los autos, pasaban á la segunda para su determinacion. Tambien le correspondian los negocios sobre reparacion de puentes y calzadas, y los recursos de injusticia notoria, que se interponian de sentencias dictadas por las Chancillerías y Audiencias en negocios civiles; y antiguamente en los criminales tambien, hasta que se prohibió en estos (leyes 1.ª y 2.ª, tít. 23, lib. 11, Nov. Rec.), á consulta del Consejo de 1758, por los inconvenientes que solia producir la demora en el castigo de ciertos delitos, y porque la ley 11, tít. 20, libro 4.º de la Recopilacion prohibia el grado de segunda suplicacion en las causas criminales, debiendo estas ejecutoriarse por las salas del crímen de las Audiencias y Chancillerías.

Era de la competencia de la misma sala segunda de gobierno el conocer de las apelaciones de providencias del superintendente de imprentas, y de las dictadas por el corregidor de Madrid, en las cosas de policía y gobierno; espedir cédulas y provisiones para que los pleitos pendientes en las Chancillerías y Audiencias pasaran *á mas señores*; remitir las discordias á la sala primera de gobierno, y á esta las de la segunda, juntándose en ambos casos todos los ministros de una y otra en la primera; asistir á la vista y determinacion de los recursos de fuerza en conocer y proceder y los de Millones, á que, segun se ha dicho, concurria tambien la sala de gobierno; conocer de todos los espedientes que, principiados en sala primera se hicieran luego litigiosos, y en los correspondientes á la misma sala primera, cuando esta se hallase ocupada en otros asuntos; y por último, sustanciar y fallar, segun auto del Consejo de 18 de Enero de 1747, los pleitos de cuentas, arbitrios y caudales públicos, y los demás negocios contenciosos.

Sala de Mil y Quinientas. Fué establecida por Enrique III en 1390, disponiendo la ley 3.ª, tít. 24, lib. 11, Nov. Rec., que el Consejo fallase los pleitos sobre Estados y

mayorazgos, en cuanto á la tenuta y posesion solamente, sin admitir apelacion ni súplica de sus fallos, siendo de la competencia de las Chancillerías las cuestiones sobre propiedad de los bienes amayorazgados.

Hemos dicho que, segun la nueva planta, que dió al Consejo Felipe III (ley 62, cap. 22, tít. 4.°, lib. 2.°, Rec.) debia componerse de diez y seis ministros y un presidente: y entonces se mandó que los pleitos de tenuta se viesen y fallasen en sala de Mil y Quinientas, con asistencia de los once que componian las tres salas de justicia. En 20 de Julio de 1750 dispuso el Consejo, prévia consulta, que los artículos ó incidentes sobre administracion, que se formaran en los pleitos de tenuta, se viesen y fallasen por la sala de Mil y Quinientas únicamente, en el término perentorio de cuarenta dias; que la misma sala sustanciase los pleitos de tenuta hasta ponerlos en estado de sentencia definitiva, y que conociera de todos los artículos que se formasen incidentalmente, escepto el que pudiera promoverse acerca de ser ó no de tenuta el caso, y de haber ó no lugar á este juicio.

A la misma sala correspondia la vista y determinacion de las residencias de los corregidores y jueces del Reino, las pesquisas y visitas, no debiendo verse estos negocios con menos de cinco ministros (leyes 62, cap. 19, tít. 4.°, y 11, tít. 5.°, lib. 2.°, Rec.), cuyas sentencias no eran suplicables en la parte, en que, para informar á S. M. del mérito ó demérito de los residenciados, se les declaraba ó no por buenos, segun Real órden de 18 de Agosto de 1755, mandando observar en adelante la ley 44, tít. 4.°, lib. 2.° de la Recopilacion. Tambien le correspondia conocer de las apelaciones del ministro del Consejo, juez protector y conservador de los privilegios y negocios concernientes al número de receptores de la Córte; y se dispuso (auto 94, tít. 4.°, idem) que de los recursos de apelacion de los protectores de los hospitales de Madrid conociese igualmente dicha sala, pero no en lo económico y gubernativo, sino solo en lo contencioso (1).

Se dió á esta sala el conocimiento de todas las causas, dimanadas de la antigua visita del Consejo de Hacienda, suprimida en 1720, y de los negocios y transacciones procedentes del mismo (auto 87, tít. 4.°, libro 2.°, Rec.). Y por Real decreto de 23 de Marzo de 1763 se dispuso que, con arreglo al capítulo 5.° de la nueva planta, dada al dicho Consejo de Hacienda en 1593, le tocaba á la sala de Mil y Quinientas el conocimiento de las ventas de alcabalas, tercias y demás rentas de la Corona; las de todo género de jurisdiccion que, siendo realenga, se concediera á particulares; las de cualesquiera oficios de antiguo establecimiento, ó acrecentados, bien fuesen en propiedad ó por cierto número de vidas; las de toda especie de tierras, montes, árboles y cortijos, en que la Corona concediese algun dominio ó aprovechamiento; las de acotamientos de tierras, cuando con ellas se diese alguna jurisdiccion; las de férias y mercados francos ó con minoracion de tributos, y las de cualquiera otro derecho ó pieza que proviniese del Real patrimonio.

Asimismo le correspondia, conforme al decreto de 7 de Julio de 1750, conocer de los pleitos que pudieran ocurrir entre las villas de Almagro, Villanueva de los Infantes, Alhambra, Torre de Juan Abad, Villa-Manrique y demás pueblos del Campo de Montiel, sobre el uso de comunidad de pastos y aplicacion y destino de sus productos y arbitrios; como tambien de las apelaciones del juez protector de la Real Cabaña de carreteros, en los pleitos sobre pastos, correspondiendo á la sala de justicia las que versasen sobre otros asuntos, segun providencia del consejo de 28 de Enero de 1756. Conocia de todos los pleitos sobre amparo y despojo de dehesas, posesiones de pastos de la Cabaña Real de ganado lanar merino, de las apelaciones de los presidentes del Consejo de la Mesta, de los alcaldes entregadores y de cuadrilla, de cuyas

(1) Los establecimientos benéficos, de cuyos negocios conocia en apelacion, eran las reales casas de niños desamparados de esta córte, los de la inclusa, beaterio de S. José, hospital de convalecencia de unciones y Colegio de S. Nicolás de Bari.

instancias estaban inhibidas las Chancillerías y Audiencias, finalizándose las apelaciones con la primera sentencia del Consejo, sin mas recurso ni nuevos autos ni probanzas (leyes 2.ª y 5.ª, tít. 27, lib. 7.º, Nov. Rec.).

Tambien le correspondia conocer de los pleitos sobre ventas de oficios y cosas que se beneficiaban contra *condicion de Millones* (auto 39, tít. 4.º, lib. 2.º, Rec.), y sobre tanteo de oficios y jurisdicciones de señorío; espedir provisiones auxiliatorias de los despachos de los presidentes y jueces de Mesta; entender en todos los negocios tocantes al cobro de la renta y derechos del servicio y montazgo, pertenecientes al Real Erario, y que se adeudaban en todos los puertos, hasta la publicacion del decreto de 23 de Mayo de 1758, por el cual fué estinguida dicha renta; y finalmente, de las apelaciones de providencias sobre pastos y tasa de yerbas.

Los pleitos sobre reversion á la Corona de cualquier estado, ciudad, lugar ó villa, se veian y determinaban por la sala de Mil y Quinientas, la de justicia y la de provincia, las tres reunidas, como se practicaba en los de tenuta y en los grados de segunda suplicacion, debiendo consultarse con S. M. los de reversion á la Corona.

Sala de justicia. Conocia de los negocios concernientes á la retencion de bulas y breves pontificios (auto 15, cap. 25, id.); confirmaba las ordenanzas de las ciudades, villas y lugares, debiendo consultar con S. M. las de la Córte; entendia en los negocios de esperas y moratorias de justicia, pues las de gracia hemos dicho que correspondian á la sala primera de gobierno; tenia conocimiento de las apelaciones de autos del ministro visitador de los subalternos del Consejo, y de las visitas de los alguaciles de Córte, segun declaracion del Consejo de 16 de Setiembre de 1658, y de las que hacia la Real junta del Aposento, hasta que en 22 de Octubre de 1749 dispuso Fernando VI que conociese de estos negocios el Consejo de Hacienda.

En la misma sala de justicia se sustanciaban los recursos y demandas de nuevos diezmos, y los espedientes sobre aprobacion de sínodos y reparos de iglesias, así como las demandas de retencion de cédulas y gracias que se espedian por el Consejo de la Cámara; las apelaciones en los pleitos de justicia, que se llevaban al Consejo por lo respectivo á la corona de Aragon; las del ministro, juez de comision de la Real Cabaña de carreteros y sus delegados, escepto los negocios que correspondian á la sala de Mil y Quinientas, segun hemos dicho; las de autos y sentencias de los ministros del Consejo, en los asuntos de que entendian en comision por virtud de Real cédula; escepto las apelaciones del presidente de la Mesta, juez conservador de la dehesa de la Serena, el del número de receptores de la córte, y las de los protectores de hospitales, que tambien digimos correspondian á la sala de Mil y Quinientas.

De las competencias entre justicias y jueces de comision, y de las que se suscitaban entre éstos y otros tribunales (auto 15, capítulo 8.º, tít. 4.º, id.), se dió conocimiento á la sala de justicia; pero no de las competencias entre tribunales superiores de la córte, las cuales eran decididas por los ministros nombrados jueces de competencia. A la sala de justicia tocaba tambien ver los pleitos remitidos en discordia por las de provincia y Mil y Quinientas, y conocer (ley 1.ª, título 38, lib. 7.º, Rov. Recop.) de los negocios tocantes á las casas de San Lázaro y San Anton, que eran del Real patronato.

Sala de provincia. Le correspondian (ley 2.ª, tít. 6.º, lib. 2.º, Recop.) las apelaciones en los pleitos fallados por los alcaldes de Córte, que conocian de lo civil (sobre la tramitacion de estas apelaciones y privilegios del número de escribanos de Madrid, pueden verse las curiosas noticias que dá Martinez Salazar, obra citada, pág. 169 y siguientes): así como despachar provisiones auxiliatorias de las requisitorias y despachos que libraban los alcaldes de Córte y tenientes de corregidor de Madrid, y asistir con la de Mil y Quinientas y la de justicia, segun hemos dicho, á la vista de los pleitos de tenuta y de reversion á la Corona, y á los grados de segunda suplicacion.

Sala de alcaldes de Casa y Corte. Ejercia jurisdiccion criminal y civil. La criminal era

suprema, absoluta, no admitiéndose apelacion ni súplica de sus sentencias sino para ante ella misma. Su jurisdiccion civil era comun, conociendo los alcaldes, como jueces ordinarios, en primera instancia de los pleitos civiles, con apelacion ante el Consejo.

Hemos indicado que, al darse, en 10 de Noviembre de 1715, nueva planta á los tribunales, se comprendió entre ellos la sala de alcaldes; y habiéndose derogado los decretos espedidos á este fin, restituyéndose á los tribunales y consejos en su jurisdiccion antigua, se mandó que la sala de alcaldes se compusiese de un ministro del Consejo, que la presidia con el título de gobernador, doce alcaldes, un fiscal, cuatro escribanos de Cámara del crímen, dos relatores, un agente fiscal, un abogado, un procurador de pobres, y el mismo número de escribanos de provincia que tenia.

Correspondíale el gobierno político y económico de la Córte, y hacer cumplir las leyes, pragmáticas, Reales órdenes, acuerdos, providencias del Consejo y autos de buen gobierno, que tambien ella proveia por sí misma. Conocia en todas las causas de hurtos, robos y delitos que se cometieran dentro de las cinco leguas de la jurisdiccion de la córte y fuera de ella, como prevenia el auto acordado (58, tít. 6.°, lib. 2.° Recop.), y en las apelaciones de las sentencias que daban los alcaldes y otros jueces de la hermandad de los lugares comprendidos en las dichas cinco leguas de la jurisdiccion de la córte, que eran cincuenta y cuatro, escluyendo los exentos, que ascendian á veintiuno.

Antiguamente conocia de las apelaciones de jueces de comision, sobre caza y demás pertenecientes á los Reales sitios del Pardo y Aranjuez, hasta que se estableció, en 1565, la junta de obras y bosques. Por comision del Rey ó del Consejo, conocia tambien de cualesquiera delitos, cometidos fuera de las cinco leguas de la jurisdiccion de Madrid, y de causas graves contra espías, por apresamiento de naves, infidencias, alistamiento en banderas enemigas, rebeliones, ventas de mercancías faltas de ley, pérdidas de naves por falta de socorro, escesos de compañía de soldados alojada en los pueblos, alboroto de las guarniciones, y finalmente, de todos los casos que parecia conveniente remitirle para su conocimiento (1).

De sus determinaciones en lo criminal no habia apelacion, ni se podia emplear esta palabra en los recursos procedentes ante el Consejo. En 1645, con motivo del gran cúmulo de causas y negocios en que tuvo la sala que conocer, mandó el Consejo que se dividiese en dos, repartiéndose entre ellas los alcaldes; y que cuando faltase alguno de la segunda, se supliese de la primera, y vice versa; mas no se sabe, y el mismo Martinez Salazar (obra citada, pág. 332) lo ignoraba, si se puso en práctica aquel mandato, que no consta en los libros de acuerdos.

Tambien le correspondian las apelaciones de las causas criminales, de que conocian los corregidores y jueces ordinarios del lugar, en que residia la Córte; cuidar de que la tasacion y aprecio de casas, pinturas y librerías se ejecutasen precisamente por los maestros y artífices, nombrados á este fin por el Consejo; entender en los casos de Córte; publicar bandos de policía y pregones para el régimen y buen gobierno de Madrid; señalar anualmente la postura ó precio á que se hubieran de vender ciertas clases de bebidas y comestibles en Madrid y en las tabernas de los lugares sujetos á la jurisdiccion de la sala; nombrar predicadores cuaresmales, médicos y cirujanos para los pobres y enfermos, tesorero ó mayordomo de la cárcel, etc.

Los alcaldes podian, cada uno de por sí, admitir acusaciones y querellas, recibir informaciones, dictar autos de prision, y prevenir cuantas causas criminales ocurriesen, tomando de ellas conocimiento; pero sin la concurrencia é intervencion de toda la sala, no se podia dictar sentencia absolutoria ni condenatoria.

En cuanto á prerogativas, ya hemos visto

(1) Hasta 1.° de Enero de 1747, en que se mandó poner uno de campana dentro del edificio, el reloj por que se gobernaba la sala de alcaldes, era el de la torre de Santa Cruz, derribada, juntamente con la iglesia parroquial del mismo nombre, á mediados de 1869.

en el artículo **MESAMANOS**, de tribunales y consejos, que el de Castilla, y aunque tambien se dice del de Estado, precedia á todos, y lo mismo en toda solemnidad, fiestas y regocijos á que concurria. «Esta primacía, dice Salazar (obra citada, cap. 1.°), la confirma mas bien el singular honor de que los Reyes entrasen y se sentasen en el Consejo, para el despacho de sus negocios, mandando que á este fin estuviese siempre prevenida la Real silla (ley 32, lib. 2.°, tít. 3.°, de las Ordenanzas de Castilla, y leyes 1.ª y 2.ª, tít. 2.°, lib. 2.°, Recop.). Y sin duda de aquí proviene la práctica, que se observa, de que los relatores y abogados en sala primera y segunda de gobierno, hacen relacion é informan de pié; y en las demás lo verifican sentados. No es menos apreciable la elevada regalía, que este Supremo Tribunal obtiene de sentarse y cubrirse en presencia de la Real persona, cuando concurre con S. M. á la *consulta* de los viernes. Llegó á tanto su autoridad, que tomó conocimiento en cuantos negocios se ofrecian en la Monarquía, y en las Córtes de Burgos, de 1314, se mandó que el Consejo asistiese á la Córte, y que á él fuesen las apelaciones de todos los demás tribunales.» (Silva, *Catálogo Real*, cap. 70).

Al fin el Real Consejo de Castilla fué suprimido, por Real decreto de 24 de Marzo de 1834, creándose en su lugar un *Tribunal Supremo de España é Indias*, para que conociese en varios de los asuntos contenciosos, en que aquel entendia, y un *Consejo Real de España é Indias*, para consultar á S. M. en los negocios gubernativos, segun esplicamos en sus respectivos artículos; hoy sustituido por el Consejo de Estado, en parte de lo consultivo, y por el Tribunal Supremo de Justicia, en lo judicial.

CONSEJO DE CRUZADA. Concedida sucesivamente, y como decimos en otro lugar, á los Reyes de Castilla, la bula de la Cruzada y su producto para auxiliar por este medio contra infieles, que aun ocupaban la España, la recaudacion y administracion de aquel fué de tal importancia, que el Rey Católico, con la Reina Doña Juana, creó, en 1509, un Consejo supremo, que por su objeto y fin se denominó de Cruzada. Componíase en un principio del Comisario general de Cruzada, dos consejeros del Consejo de Castilla, uno del de Aragon, otro del de Indias, dos contadores, un fiscal, un relator, dos escribanos de cámara y tres solicitadores. Reuníase el Consejo tres veces á la semana, los mártes, jueves y sábados por las tardes. Con la gracia de cruzada conocia tambien el Consejo de las de subsidio y escusado, y de las cuestiones de cuestores y subdelegados, cuyos negocios venian por apelacion, terminando con la sentencia del Consejo. Con pocas vicisitudes existió hasta 1750, en que lo suprimió Fernando VI, nombrando una direccion para lo administrativo, y un tribunal, adicto á la comisaría general, para lo contencioso (ley 12, tít. 11, lib. 2.°, Nov.). Véase á Silva, *Catálogo Real*, cap. 78; y Gil Gonzalez, en su *Teatro*, fólio 519.

CONSEJO DE ESTADO. Por la denominacion parece debiera ser el único y de la mas elevada categoría que, en el órden político y administrativo, aconsejara y dirigiera al Monarca, ó al poder supremo, con abstraccion absoluta de atribuciones judiciales. Y, sin embargo, en España hemos tenido Consejo de Estado y tenemos; pero no completamente de esa índole, como veremos.

Reseña histórica. Se concibe bien que, cuando, desde el principio de la Monarquía castellana, habia un Consejo supremo, de la autoridad y universales atribuciones que el de Castilla, ó no apareciese nunca, ó tardase en aparecer otro de índole universal tambien, y categoría de supremo, como el de Estado; pero sucedió esto segundo.

Oscuro en su orígen preciso, en la legislacion y en la historia, véanse á este propósito los artículos **CAMARA** (*Consejo de la*): **CONSEJO** (*como institucion*) y **CONSEJO DE CASTILLA**, al principio de cada uno; por lo que no descenderemos aquí á mas pormenores sobre el particular. Solo sí diremos que el primer testo legal, que dá razon de él en nuestros códigos, es la nota del tít. 7.°, lib. 3.°, Nov. Rec.

Por ella se vé que en Real decreto de 8 de

Julio de 1787, resolvió Cárlos III que, además del Consejo de Estado, hubiese una junta suprema, tambien de Estado, ordinaria y perpétua; es decir, que ya el Consejo de Estado venia existiendo antes de 1787, de lo cual hay tambien datos históricos; si bien ahora cedió su puesto á la mencionada junta suprema, ó compartió con ella sus tareas, hasta que en 1792, por Real decreto de 28 de Febrero lo restableció Cárlos IV, en su primitivo ejercicio, haciendo cesar la junta (ley 1.ª, tít. 7.º, lib. 3.º, Nov.).

El propio Monarca, por decreto de 1798, (dicho título y libro), en atencion á ser el Consejo de Estado el de la mayor dignidad de la Corona, declaró á sus individuos las mas honrosas preeminencias.

Ya hemos visto la tendencia de nuestros antiguos legisladores á asociar en estos cuerpos las funciones de mera consulta, con las gubernativas; y las gubernativas con las judiciales, lo cual repugnaba á las nuevas ideas, que desde la revolucion francesa del siglo pasado principiaron á propagarse por toda Europa, y entre las cuales descollaba la division é independencia de los poderes públicos, como una base necesaria de todo buen régimen constitucional.

Inspiradas en esta teoría las Córtes de Cádiz, no podian menos de separar, como separaron, en el preámbulo de su célebre Constitucion, y en esta á su vez, la mezcla de atribuciones gubernativas con las judiciales. Y si bien reconocieron la necesidad y encomiaron la conveniencia de un Consejo de Estado, que diese al Gobierno el carácter de estabilidad, prudencia y sistema, que se requeria, fué precisamente para que en él se refundiera el conocimiento de los negocios gubernativos, que andaban antes repartidos entre los tribunales supremos de la córte, con grande embarazo, sin duda, de la administracion de justicia, de cuyo alto ministerio no debian ser en ningun caso distraidos los encargados de administrarla. En consecuencia, la Constitucion de 1812 estableció un Consejo de Estado, compuesto de cuarenta individuos (de los cuales doce, á lo menos, habian de ser nacidos en las provincias de Ultramar), nombrados por el Rey, á propuesta de las Córtes, á saber: cuatro eclesiásticos, y no mas, dos de ellos obispos, de conocida y probada ilustracion y merecimiento; cuatro grandes de España, y no mas, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los restantes elegidos de entre los sugetos, que mas se hubiesen distinguido por su ilustracion y conocimientos, ó por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administracion y gobierno del Estado (art. 231 y 232).

Este Consejo, único permitido al Rey, *debia* ser oido en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar ó negar la sancion á las leyes (facultad que la ley fundamental reservaba á la Corona), declarar la guerra y hacer los tratados (art. 236), siendo además de su atribucion, como lo habia sido antes de la Cámara de Castilla, hacer al Rey la propuesta, en terna, para la presentacion de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provision de las plazas de judicatura (artículo 237). En fin, para afianzar en el Consejo la independencia de sus deliberaciones, se aplicó á sus individuos el principio de la inamovilidad, en términos poco menos inflexibles, que á la magistratura judicial (art. 239). El reglamento de 8 de Junio y los decretos y órdenes de las Córtes, de 28 de Julio, 25 y 26 de Setiembre de 1812, completaron la organizacion del Consejo y sus dependencias.

Desde entonces la historia del Consejo de Estado puede decirse que ha sido la de nuestas vicisitudes políticas. En 1814, despues del célebre manifiesto del Rey, de 4 de Mayo, por el que se declararon nulos la Constitucion y demás decretos, así de las Córtes estraordinarias, como de las ordinarias, lo que implicaba la supresion del citado cuerpo, fuéronse restableciendo uno á uno los del antiguo régimen, bajo el pié, en que se hallaban en 1808; y así siguieron las cosas, hasta 1820, en que, restablecida y jurada por Fernando VII la Constitucion de 1812, reapareció el Consejo de Estado, en ella establecido; bien que para volver á sucumbir con el gobierno constitucional en 1823.

Sin embargo, por Real decreto de 5 de Di-

ciembre de aquel año, se mandó proceder á la instalacion de uno nuevo, compuesto de diez individuos, bajo la presidencia del Rey, y éste, aparte de los otros Consejos tradicionales, era el que existia en 1833 á la muerte de Fernando VII, no sin haber acrecentado grandemente sus atribuciones y su elevacion, aunque por un impulso de circunstancias, con vastos planes de forma, que espresamente le encomendó el Real decreto de 28 de Diciembre de 1825, el no pequeño número de altos dignatarios que se le agregaron, y la especie de inviolabilidad, de que le revistió la declaracion de que los consejeros no podrian ser separados, ni alejados de la Córte, ni de la Real persona, sino por delitos positivos y en virtud de una órden espresa del Rey.

El Consejo de gobierno, instituido por Fernando VII, en su testamento, para que su augusta viuda le consultase, como Reina Gobernadora, los asuntos árduos, trascendentales y que formaran regla general, hacian verdaderamente supérfluo el de Estado, ó mejor dicho, escluia el ejercicio de sus funciones. Declarósele, pues, en suspenso, durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, por Real decreto de 24 de Marzo de 1834.

La causa de esta suspension cesó en 1836, á consecuencia de los sucesos de la Granja, que hicieron desaparecer el Consejo de gobierno; pero ni volvió á ocupar su puesto el de Estado, que á la muerte del Rey existia, ni llegó á formarse el de la Constitucion de 1812, nuevamente proclamada. Verdad es que semejante proclamacion inauguraba tan solo un período de breve interinidad; pues, convocadas á poco Córtes constituyentes, no tardó un año en promulgarse la nueva Constitucion política de 1837, en la cual, sin embargo, no se indicó siquiera, ni bajo la denominacion de Consejo de Estado, ni con ninguna otra, la idea de un alto cuerpo consultivo del gobierno.

Esta omision, deliberada ó casual, hubo de notarse muy pronto que dejaba un gran vacío en el régimen del país, y el gobierno se apresuró á nombrar una comision, que redactase un proyecto de ley de Consejo de Estado: proyecto efectivamente presentado al Senado, en la legislatura de 1838 y reproducido en la siguiente, pero que no llegó á ser ley.

Nuevos cambios políticos produjeron las Córtes constituyentes de 1844, y con ellas la ley de 1.° de Enero de 1845, que autorizaba al gobierno, entre otras cosas, para la organizacion de un cuerpo ó Consejo supremo de administracion. En uso de esta autorizacion, se dictó la ley de 6 de Julio de 1845, creando y planteando el Consejo Real, sobre bases, que son todavía, en puntos muy importantes de organizacion y atribuciones, las del actual Consejo de Estado; aunque no sin haber sufrido, como hemos insinuado antes, el influjo de nuestras alternativas políticas. Suprimióse el Consejo Real en 1854, sustituyéndole, por lo tocante á lo contencioso-administrativo, con un tribunal especial, y acordándose la institucion de un nuevo Consejo con el título *de Estado*.

En 1856 se restableció el *Real*; pero sin desconocer que la ley de 1845, á que debia su existencia, así como las demás administraciones de aquella época, podrian ser mejoradas; á cuyo fin se dispuso que el gobierno, oyendo á una comision de personas competentes, propusiese las reformas que hubiese necesidad de introducir en las referidas leyes, de acuerdo con las Córtes.

La reforma se hizo esperar hasta 1860, en cuyo año, por la ley de 17 de Agosto, se organizó el Consejo de Estado, fijándose sus atribuciones y procedimientos, segun han existido hasta la revolucion de Setiembre de 1868, la cual con todo, solo en parte, aunque en una parte muy importante, modificó aquella institucion. Pero hoy subsiste y es el actual Consejo de Estado, de que debemos dar una idea mas detallada, al tenor de la mencionada ley orgánica de 1860.

Categoría y organizacion del actual Consejo de Estado. (Ley de 17 de Agosto de 1860.) «Art. 1.° El Consejo de Estado es el cuerpo supremo consultivo del Gobierno, en los asuntos de gobernacion y administracion, y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar. Precede á todos los cuerpos del Estado, despues del Consejo de Ministros, y es impersonal su tratamiento.

»Art. 2.° El Consejo de Estado se compondrá de los ministros de la Corona, de un presidente y de treinta y dos consejeros.

»Art. 3.° El sueldo del presidente será el de 120,000 rs. anuales, y de 60,000 el de los demás consejeros.

Todos tendrán el tratamiento de Excelencia.

»Art. 4.° Para ser nombrado consejero de Estado se requiere ser español, y haber cumplido la edad de treinta y cinco años.

»Art. 5.° Veinticuatro nombramientos de consejeros habrán de recaer en personas, que estén ó hayan estado comprendidas en una de las clases siguientes:

Presidente de alguno de los cuerpos colegisladores:

Ministro de la Corona:

Arzobispo ú obispo:

Capitan general de ejército ó armada:

Vicepresidente del Consejo Real:

Embajador:

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del de Guerra y Marina ó del de Cuentas.

»Art. 6.° Tambien podrán ser nombrados consejeros, en las veinticuatro plazas á que se refiere el artículo anterior, los que hayan ejercido, durante dos años, en propiedad, alguno de los empleos ó cargos siguientes:

Teniente general de ejército ó armada:

Consejero Real ordinario ó de Estado:

Ministro ó fiscal de alguno de los Tribunales espresados en el artículo anterior:

Ministro plenipotenciario con mision á una córte estranjera:

Fiscal del Consejo de Estado ó del antíguo Real; auditor de número, ó fiscal del Tribunal de la Rota; decano, ministro ó fiscal del Tribunal de las Ordenes militares:

Regente de la Audiencia de la Habana:

Ministro ó fiscal del Tribunal Supremo contencioso-administrativo.

Para computar estos dos años se tomará en cuenta el tiempo, que el nombrado haya servido en los diferentes empleos ó cargos, comprendidos en este artículo.

»Art. 7.° Ocho plazas de consejero de Estado podrán proveerse en personas, que, aun cuando no se hallen comprendidas en las clases de empleos ó cargos enumerados en los artículos anteriores, se hayan distinguido notablemente por su capacidad y servicios.

»Art. 8.° Los consejeros de Estado, el secretario general y el fiscal, no podrán ejercer ningun cargo en sociedades industriales ó mercantiles.

»Art. 9.° Los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey, á propuesta del Consejo de Ministros, y en decretos especiales, refrendados por su presidente.

En ellos se espresarán las calidades, que den opcion al elegido para ser consejero, y la seccion del Consejo, á que ha de quedar adscrito. Para su separacion se observarán las mismas formalidades. Los Reales decretos de nombramiento y separacion se publicarán en la *Gaceta de Madrid*.

»Art. 10. El Consejo, antes de dar posesion al nombrado, examinará si su nombramiento se halla arreglado á lo prescrito por esta ley; y si esto ofreciese alguna duda, la elevará al Gobierno, suspendiendo la posesion, hasta que resuelva lo que estime conveniente.

»Art. 11. Los consejeros, antes de tomar posesion, jurarán ser fieles á la Reina (hoy variado), haberse fiel y lealmente en el desempeño de su cargo, procurar el bien de la nacion, y consultar con arreglo á la Constitucion y á las leyes en los negocios que les sean encomendados.

»Art. 12. Siempre que el Gobierno lo estime conveniente, podrá autorizar, para que asista al Consejo, con voto, un comisario que sea jefe superior de la administracion civil ó militar.....

»Art. 15. Las secciones serán seis, correspondiendo á cada una de ellas el número de consejeros letrados que sigue:

A la de Estado y Gracia y Justicia, tres:

A la de Guerra y Marina, uno:

A la de Hacienda, uno:

A la de Gobernacion y Fomento, dos:

A la de Ultramar, dos:

En la de lo contencioso todos serán letrados.

En la seccion de Ultramar habrá siempre

dos consejeros, que hayan servido en aquellas posesiones.

»Art. 16. Cada seccion tendrá un presidente, nombrado en la forma que espresa el artículo 9.°

»Art. 17. El Gobierno, oyendo al presidente del Consejo de Estado, designará al principio del año, por Reales decretos, el número de consejeros de que haya de componerse cada seccion, y aquella á que haya de corresponder cada consejero; designacion que podrá variar en lo sucesivo en la misma forma, segun lo exijan las necesidades del servicio.....

»Art. 20. Cuando no asista al Consejo pleno el presidente, lo reemplazará el presidente de seccion mas antiguo; y en el caso de ser dos ó mas de igual antigüedad, el mas anciano. En su defecto el consejero mas antiguo, y entre iguales, el de mas edad.....

»Art. 22. Las secciones, á falta de su presidente, serán presididas por el consejero mas antiguo; y en caso de igual antigüedad, por el mas anciano.

»Art. 23. Siempre que asistan los Ministros, presidirá el Consejo de Estado el presidente, y en su defecto el Ministro, á quien corresponda por el órden de los respectivos ministerios. Lo mismo se hará, cuando los Ministros asistan á la sala de lo contencioso ó á las secciones.

»Art. 24. El Gobierno podrá destinar temporalmente á algunos consejeros, cuyo número nunca pasará de cuatro, con retencion de sus plazas, al mando del ejército ó armada, ó misiones diplomáticas estraordinarias, ó comisiones régias para inspeccionar algun ramo de la administracion pública en la Península ó Ultramar.

»Art. 25. Habrá un fiscal de lo contencioso, y un secretario general del Consejo. Su nombramiento y separacion se harán por Reales decretos, refrendados por el presidente del Consejo de Ministros; y disfrutarán el sueldo de 50,000 reales.

»Art. 26. Para ser nombrado fiscal ó secretario del Consejo de Estado, se necesita ser letrado, haber cumplido treinta años de edad, y estar ademas en uno de los casos siguientes:

Haber sido fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del Tribunal contencioso-administrativo.

Haber sido secretario del Consejo de Estado.

Haber desempeñado en propiedad, por dos años, el cargo de secretario del tribunal contencioso-administrativo.

Haber sido por tres años fiscal de audiencia, ó teniente fiscal, ó abogado fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del tribunal contencioso-administrativo; ó mayor de seccion de aquellos cuerpos; ó catedrático de término de la facultad de administracion ó de derecho.

Haber pertenecido al colegio de abogados de Madrid, pagando en tal concepto una cuota de las dos mayores, por espacio de cuatro años.

Haber pertenecido á un colegio de abogados, en poblacion, en que haya Audiencia, pagando por espacio de cuatro años la cuota máxima de contribucion.

Sin perjuicio de la libre eleccion, que dentro de estas aptitudes le corresponde, el Gobierno, antes de nombrar secretario, oirá siempre al presidente del Consejo de Estado, que informará acerca de los que, habiendo sido mayores ó abogados fiscales, el tiempo exigido por este artículo, considere mas aptos para desempeñar el cargo de que se trata.....

»Art. 28. El Consejo tendrá, para el despacho de los negocios, el número de oficiales y aspirantes que determinen los reglamentos, no escediendo de cuarenta. Unos y otros serán nombrados por la presidencia del Consejo de Ministros, y sus nombramientos se publicarán en la *Gaceta de Madrid*.

»Art. 29. En cada seccion habrá un oficial mayor, esceptuando la de Gobernacion y Fomento, que tendrá dos. El mas antiguo de los mayores tendrá 35,000 reales y los demás 30,000.....

»Art. 44. No se conferirán honores de consejero de Estado.»

Tenia además el Consejo dos tenientes fiscales (art. 38 de la propia ley).

Pero el fiscal y tenientes fiscales, y el número correspondiente de auxiliares, lo eran para la seccion de lo contencioso; mas por decreto del Gobierno provisional, luego elevado á ley, de 13 de Octubre de 1868, se suprimió el conocimiento contencioso-administrativo en el Consejo, y por tanto la seccion, pasando dicho conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia, en la forma que espresamos en la siguiente subdivision.

Sobre la seccion de marina, véase en el artículo **CONSEJO DEL ALMIRANTAZGO** las novedades inducidas en el mismo.

El número de los consejeros, en fin, fué reducido al de 20, por las leyes de presupuestos, con el fin de introducir economías en los gastos del Estado.

Cuando los Ministros de la Corona concurren al Consejo, no solo tienen voz y voto en él, sino que dirigen las discusiones, presidiendo el acto el presidente del Consejo de Ministros, y en su defecto, el Ministro á quien corresponda, por el órden de los respectivos Ministerios. Lo mismo se observa cuando los Ministros asisten á las secciones (art. 23 de la ley.)

La ley no ha fijado circunstancias de elegibilidad para el presidente, considerando, sin duda, que la importancia misma del cargo lo pone al abrigo de elecciones indignas; pues con efecto, á poco que un Gobierno consulte el interés público y de su propio crédito, el nombramiento de tan alto funcionario recaerá siempre en sugetos de relevante mérito y esclarecidos servicios. Lo que sí debe suponerse es que, necesitándose, como pronto diremos, determinadas aptitudes para ser consejero de Estado, no se han de exigir menos títulos á la cabeza, que á los simples miembros del cuerpo.

La prohibicion, en fin, que hemos dicho en otro lugar, tienen los consejeros y el secretario general de ejercer cargos en sociedades industriales y mercantiles, no se estendió en la ley orgánica, ni en el reglamento interior, á los empleados del Consejo. Pero, por reforma hecha al reglamento, en órden de 9 de Abril de 1869 (que es hoy su art. 121) la prohibicion se ha formulado para *todos* en términos absolutos.

Atribuciones del Consejo. «Art. 45. El Consejo de Estado será oido necesariamente y en pleno:

1.° Sobre los reglamentos é instrucciones generales para la aplicacion de las leyes, y cualquiera alteracion que en ellos haya de hacerse.

2.° Sobre el pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios, y de las preces para obtenerlos.

3.° Sobre todos los asuntos concernientes al Real patronato de España é Indias, y sobre los recursos de proteccion y fuerza, á escepcion de los consignados en la ley de Enjuiciamiento civil como propios de los tribunales.

4.° Sobre la inteligencia y cumplimiento de los concordatos, celebrados con la Santa Sede.

5.° Sobre las mercedes de grandezas y títulos, á no estar acordadas en Consejo de Ministros.

6.° Sobre la ratificacion de los tratados de comercio y navegacion.

7.° Sobre los indultos generales.

8.° Sobre la validez de las presas marítimas.

9.° Sobre la competencia positiva ó negativa de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas; y sobre los conflictos, que se susciten entre los Ministerios, autoridades y agentes de la administracion.

10. Sobre los recursos de abuso de poder ó de incompetencia, que eleven al Gobierno las autoridades del órden judicial, contra las resoluciones administrativas.

11. Sobre la autorizacion que, con arreglo á las leyes, deba el Gobierno conceder para encausar á las autoridades y funcionarios superiores administrativos por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

12. Sobre suplementos de crédito, créditos estraordinarios ó trasferencia de créditos, cuando no se hallen reunidas las Córtes.

13. Sobre cualquiera innovacion en las leyes, ordenanzas y reglamentos generales de las provincias de Ultramar.

14. Sobre la provision de las plazas de

magistrados y jueces, y presentacion de los beneficios eclesiásticos del Patronato Real, segun determinen la ley de organizacion judicial ú otras disposiciones.....

«Art. 48. El Consejo será oido en secciones:

1.° Sobre los indultos particulares, que no sean acordados en Consejo de Ministros.

2.° Sobre la naturalizacion de estranjeros.

3.° Sobre autorizacion para litigar, que deba ser otorgada por el Gobierno.

4.° Sobre las autorizaciones, que deba el Gobierno conceder para encausar, por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos, á los empleados públicos no comprendidos en la atribucion 11.ª del art. 45.

5.° Sobre la admision ó denegacion de la via contenciosa contra las resoluciones de los Ministros de la Corona ó de los directores generales de los diferentes ramos de la administracion civil ó militar que causen estado.

El Gobierno podrá consultar al Consejo en pleno sobre todos los asuntos enumerados en este artículo, y acerca de cualesquiera otros de los que se hallan atribuidos en esta ley á las secciones.....

»Art. 50. El Consejo podrá ser oido en pleno ó en secciones, cuando el Gobierno lo estime conveniente:

1.° Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Córtes.

2.° Sobre los tratados con las potencias estranjeras.

3.° Sobre los concordatos que hayan de celebrarse con la Santa Sede.

4.° Sobre cualquiera punto grave que ocurra en el gobierno y administracion del Estado.....

»Art. 55. Los informes del Consejo, de la sala de lo contencioso ó de las secciones, no podrán publicarse sin autorizacion espresa del Gobierno. Esceptúase el caso, en que las leyes determinen lo contrario.»

Como se vé, las atribuciones del Consejo son hoy pasivas, del órden puramente consultivo. Antes las tenia tambien activas. Eran las relativas á lo *contencioso-administrativo*, ora en apelacion de los consejos provinciales, ora en primera y única instancia, en apelacion ó recurso sobre perjuicios irrogados por Reales órdenes administrativas, segun todo se espresaba en los artículos 18, 19, 21, 25, 26, 38, 39, 46, 47 y 49 de dicha ley; pero queda dicho, en la subdivision anterior, que el conocimiento en estos casos, se ha cometido al Tribunal Supremo de Justicia. Véase además CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (*en Ultramar*): CONSEJOS PROVINCIALES.

La Constitucion política de 1869 confirma (art. 95) el art. 45 de la ley orgánica del Consejo, y establece en el 97, que los ascensos en la carrera judicial serán á propuesta del Consejo de Estado.

En razon de lo primero, la mencionada Constitucion establece (art. 90), que para el indulto de los Ministros de la Corona, es preciso que lo pida una de los Cuerpos colegisladores.

Procedimiento. Habiendo de ser secretas en este órden las sesiones del Consejo y de las secciones, y no pudiendo ni aun publicarse los dictámenes y sentencias, sin autorizacion del Gobierno, se comprende que el procedimiento en esta parte es interior y apenas del dominio del público.

El procedimiento activo y público del consejo era el de lo contencioso-administrativo, que hoy ya corresponde á otro artículo, así como dicha jurisdiccion compete ya á otro cuerpo, segun queda espuesto. Se hallaba consignado en el tít. 3 de la ley orgánica, en el bien ordenado reglamento de 30 de Diciembre de 1846 (de 282 artículos), y en el reglamento adicional de 19 de Octubre de 1860, compuesto de 12 artículos; cuyos reglamentos todavia habrán de tenerse presentes, en su caso, con relacion al Tribunal Supremo de Justicia en sus nuevas funciones, y que en todo evento podrán ser consultados.

El Consejo tiene, en fin, para su régimen íntimo y el de las secciones su reglamento interior, publicado por Real decreto de 30 de Junio de 1861, y del que, por ser puramente interior, no damos razon.

CONSEJO DE FAMILIA. No es todavía una institucion legal entre nosotros, salvo la junta de parientes, que, en su caso, ha de dar el consentimiento para el matrimonio de los menores, de que se tratará en su lugar; pero lo es en otras naciones. En el proyecto de Código civil se establece ya, como consignamos despues. Por ello, por ser una institucion protectora y benéfica respecto de la familia, y porque de adoptarse entre nosotros, ha de traerse de los códigos estranjeros, y muy señaladamente del de Francia, esplanamos la idea conforme á este.

Segun él, cuando un menor, no emancipado, queda huérfano de padre y madre, sin tutor designado por alguno de estos y sin ascendientes varones; como tambien cuando el tutor, bien sea ascendiente, ó nombrado por el padre ó la madre, en su caso, se encuentra en el de ser escluido ó se halla legalmente escusado, se procede por el consejo de familia al nombramiento de un tutor. Este consejo es convocado á instancia de los parientes del menor, de sus acreedores ó de otras personas, interesadas, como tambien de oficio por el juez de paz del domicilio del menor; y toda persona puede poner en conocimiento de éste el hecho que dá lugar al nombramiento de un tutor.

El consejo de familia se compone, además del juez de paz, de seis parientes consanguíneos ó afines, residentes en la localidad, donde se instruye el espediente de tutela, ó á distancia de dos miriámetros, debiendo serlo tres de ellos por la línea paterna, y los otros tres por la materna, guardando el órden de proximidad en las respectivas líneas. El pariente consanguíneo es preferido al afin del mismo grado, y entre los consanguíneos del mismo grado, el de mayor al de menor edad. Los hermanos carnales del menor, y los maridos de las hermanas carnales no están sujetos á la prescripcion taxativa del número de seis: si son seis, ó mas, todos ellos son miembros del consejo de familia, que forman solos con las viudas de ascendientes, y los ascendientes legalmente escusados, si los hay: y si son en número inferior al de seis, los otros parientes solo son llamados hasta completarlo. Cuando en la localidad, donde radica el espediente de tutela, ó á la distancia de dos miriámetros, no se encuentran parientes consanguíneos ó afines, de una ú otra línea, en número suficiente para componer el consejo, el juez de paz designa, ó bien parientes domiciliados á mayor distancia, ó bien, en la misma localidad, vecinos que hayan tenido relaciones habituales de amistad con el padre ó la madre del menor; y puede aun, en el caso de haber en las localidades indicadas suficiente número de parientes consanguíneos ó afines para componer el consejo, permitir que se cite, sea cual fuere la distancia á que estén domiciliados, á parientes consanguíneos ó afines mas próximos en grado, ó del grado mismo que los parientes, consanguíneos ó afines presentes; pero en todo caso, si esto se efectúa, se suprimen algunos de estos últimos, á fin de que el consejo no esceda de seis individuos.

El juez de paz fija el término, para que estos comparezcan en un dia determinado, de manera que medie siempre, entre la citacion y el dia designado para la reunion del consejo, un intervalo de tres dias, á lo menos, cuando todas las partes citadas residen en la localidad, ó á la distancia de dos miriámetros; pero siempre que entre las partes citadas se encuentren personas domiciliadas á mayor distancia que la espresada, se aumenta el término á razon de un dia por cada tres miriámetros.

Los parientes consanguíneos, afines ó amigos, en esta forma convocados, tienen obligacion de presentarse personalmente, ó por un apoderado especial, sin que éste pueda representar á mas de una persona: y el que, sin escusa legítima, no comparece, es multado por el juez de paz, sin apelacion, hasta en cantidad de 50 francos.

El consejo se reune en el domicilio del juez de paz, á no ser que él designe otro local; y para deliberar es necesario la presencia de tres cuartas partes, al menos, de los miembros convocados. La presidencia corresponde al juez de paz, con voto consultivo, y en caso de empate, decisivo.

El consejo de familia tiene tambien intervencion y es llamado por el tribunal á dar

su parecer acerca del estado de una persona, á quien se trate de privar de la administracion de sus bienes, por imbecilidad, demencia ó furor; en cuyo caso no pueden formar parte de él los que han deducido esta pretension. Sin embargo, pueden ser admitidos al consejo, pero sin voto, el esposo, la esposa ó los hijos, aunque sean los demandantes. (Código civil francés, arts. 25, 406, 427, 442, 445, 507, 1056: penal, 34, 42, 43, 335, 401; y de procedimientos, 882, 885, 889, 892, 968, 1035.)

En razon de ello, el proyecto de Código civil español, dispone lo siguiente:

»Art. 190. Se procederá á la formacion del consejo de familia, siempre que haya que nombrar tutor ó *protutor*, y en los demás casos en que la ley requiere su reunion.

»Art. 191. Compondrán el consejo de familia el alcalde del domicilio del huérfano, y los cuatro parientes mas allegados de éste; dos de la línea paterna y dos de la materna, que estén avecindados en el mismo pueblo, ó en otro, que no diste mas de seis leguas.

Entre los parientes se comprenderán los maridos de las hermanas del menor, mientras estas vivan.

»Art. 192. En igualdad de grados, será preferido el pariente de mas edad al mas jóven.

Los ascendientes varones, de cualquier grado, serán preferidos á las abuelas.

»Art. 193. Sin embargo de lo dispuesto en el art. 191, todos los hermanos carnales, y los maridos de las hermanas carnales serán vocales natos del consejo de familia, y si son tres ó mas, no se les agregará ningun otro pariente.

El tutor no puede ser vocal del consejo de familia.

»Art. 194. El alcalde tiene obligacion de cumplir con lo dispuesto en el art. 190, en el término de seis dias, á contar desde la muerte del padre ó madre, sea de oficio, ó por accion fiscal, ó popular.

»Art. 195. Cuando los parientes mas cercanos del menor tengan su domicilio en un pueblo, que diste mas de seis leguas del domicilio del huérfano, los convocará el alcalde; pero no los podrá compeler contra su voluntad á la aceptacion del cargo de vocal del consejo de familia.

»Art. 196. Si en el domicilio del huérfano, y á seis leguas de distancia, no se encuentra suficiente número de parientes para componer el consejo de familia, y los que vivan en pueblos mas distantes, no se prestan á aceptar este cargo, se completará el consejo con vecinos honrados, que elegirá el alcalde entre los que hayan sido amigos de los padres del menor.

»Art. 197. El alcalde señalará un término breve, en proporcion á las distancias, para que los llamados comparezcan personalmente ó por apoderado especial, que no podrá representar mas que uno solo.

»Art. 198. El alcalde puede multar hasta en cantidad de diez duros, al pariente, que no comparezca en el término que se le prefijó.

Sin embargo, cuando la no comparecencia proceda de justa causa, y el alcalde estime, útil al menos, que se aguarde al ausente, podrá deferir la reunion. Igual multa podrá imponer el alcalde á los que dejen de concurrir á cualquiera otra reunion del consejo de familia.

»Art. 199. Esta reunion, y todas las demás del consejo de familia, se celebrarán en la casa morada del alcalde, si este no designa otro local; y para deliberar y acordar bastará la mayoría de los convocados.

»Art. 200. El alcalde presidirá siempre el consejo de familia: tendrá en él voto consultivo, y en caso de empate, decisivo.

»Art. 201. Ningun individuo del consejo de familia tendrá voto, ni asistirá á sus reuniones, cuando se trate de negocio, en que tenga interés propio ó de sus hijos; pero podrá ser oido, si el consejo lo estima conveniente.»

Todavía el proyecto de Código civil esplana las aplicaciones y pormenores del consejo de familia respecto de la tutela, como vemos en su artículo y en el de CONSEJO DE TUTELA.

CONSEJO DE FILIPINAS.

Por decreto de 4 de Diciembre de 1870, con acuerdo del Consejo de Ministros, se dispuso lo siguiente:

«Art. 1.° Se crea, en el Ministerio de Ultramar, un Consejo de Filipinas.

Este Consejo, del cual será presidente el Ministro de Ultramar, se compondrá de seis vocales, cuatro nombrados por el Consejo de Ministros entre las categorías que se designan, y dos á propuesta en terna del ayuntamiento de Manila.

»Art. 2.° Los vocales de libre nombramiento, deberán pertenecer ó haber pertenecido á alguna de las categorías siguientes:

Jefe de administracion civil de primera clase, brigadier de ejército, capitan de navío, magistrado ó fiscal de Audiencia.

»Art. 3.° Cada una de las categorías, á que se refiere el artículo anterior, estará representada en el Consejo por uno de los vocales de libre nombramiento, sin que en ningun caso pueda haber mas de uno de la misma clase. Para ejercer estos cargos, será preciso haber servido, cuando menos, tres años en las Islas Filipinas.

»Art. 4.° Los consejeros, que desempeñen al mismo tiempo cargo activo, no percibirán remuneracion alguna por el de consejeros: los que estén en situacion pasiva, si pertenecen á las clases militares, se considerarán en servicio activo; y si pertenecieran á la administracion civil, disfrutarán 3,000 pesetas sobre su haber: los consejeros electos á propuesta del ayuntamiento de Manila, percibirán la cantidad que en concepto de dietas y con cargo á los fondos locales, les señale aquella corporacion.....

»Art. 7.° El Consejo de Filipinas será oido:

1.° Sobre todos los asuntos de carácter general, referentes á las islas, que hayan de ser objeto de decretos ú órdenes del Gobierno.

2.° Sobre los reglamentos para la aplicacion de las mencionadas disposiciones.

3.° Sobre todos los demás asuntos en que el Gobierno lo estime conveniente.

En los documentos que el Gobierno espidiere sobre asuntos, en que debe ser oido el Consejo, se espresará la circunstancia de haberlo sido.

»Art. 8.° El Gobierno podrá encargar al Consejo la preparacion ó redaccion de los proyectos de leyes ó decretos, relativos á los asuntos, que son propios de su competencia, comunicándole al efecto las instrucciones que juzgue necesarias.....

»Art. 10. Los informes, dictámenes y demás documentos del Consejo no podrán publicarse sin espresa autorizacion del Ministerio de Ultramar.

»Art. 11. Las sesiones del Consejo serán secretas: sin embargo, el Consejo, por acuerdo prévio, á peticion de parte ó por disposicion del Ministro de Ultramar, podrá oir á las personas que se crea conveniente.....

»Art. 14. Las facultades y atribuciones del Consejo, se entenderán sin perjuicio de las que competen al Consejo de Estado, las cuales seguirán observándose en todas sus partes.»

CONSEJO DE FLANDES Y BORGOÑA. Adquiridos definitivamente estos Estados por España, en 1555, se creo para su régimen el Consejo especial de su nombre, que, con organizacion análoga á los demás, continuó, hasta que en 1720, por el tratado, denominado de la Cuádruple Alianza, dejó la Flandes de pertenecer á España, y cesó el Consejo.

CONSEJO DE GOBIERNO. Fué ciertamente una especialidad en su clase, por la supremacía que se le dió. Lo instituyó el Rey D. Fernando VII en su testamento, para auxiliar el régimen de la Reina viuda y Gobernadora del Reino, durante la menor edad de la Reina Isabel II. Por Real decreto de 17 de Diciembre de 1833, se declaro que dicho Consejo de Gobierno fuese «*el primero y preferente sobre todos los del Reino:*» sus vocales propietarios gozarian el sueldo de 120,000 rs.: lo mismo los suplentes entrando en ejercicio; y solo 60,000 rs. en otro caso, gozando en ambos la consideracion de consejeros de Estado. Este Consejo cesó en breve con la supresion y reforma de todos los Consejos.

En 1843, el Regente del Reino, por decreto de 11 de Febrero creó tambien un Consejo de Gobierno. El cargo seria gratuito y honorífico. Sus vocales habian de corresponder á las altas categorías del Estado, y todos gozarian el tratamiento de *excelencia*. Los Ministros de la Corona eran vocales natos del Consejo, presidiendo, siempre que asistia, el presidente

del Consejo de Ministros. La fecha indica la efímera existencia de este Consejo.

CONSEJO DE GUERRA. Tribunal militar corporativo, para juzgar criminalmente los *delitos militares* y las *faltas graves en el servicio*. En otros delitos, no siendo caso de desafuero, la competencia es del capitan general con auditor.

Su orígen primitivo es oscuro; pero su orígen y forma actual proviene de la Ordenanza militar, llamada de Flandes, de 1701, y despues, de la actual, de 1768. En la práctica ha tenido y tiene varias aplicaciones, en cuanto á su forma y objeto, como tambien varias denominaciones. Sus clases principales son: *consejo de guerra ordinario*, *consejo de guerra estraordinario* y *consejo de guerra de oficiales generales*. De todos damos razon en el presente artículo.

Consejo de guerra ordinario. Se llama, sin duda, así por ser el mas frecuente y comun, como que juzga á la clase mas numerosa del ejército, desde sargento primero inclusive, hasta la de tambor ó corneta, comprendiendo tambien á los cadetes.

Está determinado este consejo en el título 5.°, tratado 8.° de la Ordenanza general del ejército.

Se compone de siete capitanes por lo menos, un presidente de superior graduacion, un juez instructor fiscal, de la clase de oficiales subalternos, con un escribano de la de tropa, lego por tanto, pero que puede testimoniar y actuar con la forma de fé pública, *ante mí*, que estampará, cuando firma con la autoridad; pero simple firma entera, ó sin antefirma, cuando firma solo.

Luego que el coronel en campaña, ó el comandante general en su distrito, tienen noticia, por denuncia, por parte que se les dé, ó por cualquier otro modo seguro, de que por algun individuo de las clases mencionadas de tropa se ha cometido algun crímen, de los que deben ser juzgados por el consejo de guerra ordinario, nombran *juez fiscal*, que instruya el competente sumario. Por Ordenanza eran nombrados los sargentos mayores de los cuerpos. Consultando sus muchas, y á veces perentorias ocupaciones, por Real órden de 10 de Agosto de 1787 se previno que, en casos no muy graves, pudieran serlo los ayudantes; y por práctica despues, viene autorizado, que el jefe superior, de quien dependa la jurisdiccion, pueda nombrar, de la clase de activos, de cuartel y aun retirados, un oficial, cuya graduacion y circunstancias estén en relacion con la clase del reo y con la calidad del crímen.

Alguna vez se ha proyectado en la infantería, y aun realizado en algunos cuerpos, que haya *comandantes fiscales*, en cuyo caso éstos serán los encargados de instruir el proceso: práctica, que no escusaria siempre el recurrir á los ayudantes, ú otros oficiales; pues de otro modo, si las causas se multiplican, el comandante fiscal no será suficiente para todas y sufrirá retraso la administracion de justicia.

Ningun oficial nombrado puede escusarse, no siendo por motivos de incompatibilidad, segun derecho, ó por imposibilidad material. Si la imposibilidad es de servicio, una vez espuesta al superior militar, éste resolverá.

En el órden civil, todo juez lego tiene asesor; lo cual no sucede, respecto del juez fiscal, en los juicios militares. Para suplirlo, éste puede acudir en todo caso de dificultad, al jefe superior militar, que resolverá con dictámen de su auditor ó asesor.

El *juez instructor* ó *juez fiscal*, denominado tambien simplemente *fiscal*, si ha sido nombrado por el coronel, acudirá por memorial al capitan general, comandante general militar, ó general en jefe en campaña, segun el caso, dando cuenta de su nombramiento y del hecho, pidiendo autorizacion para instruir el sumario, interrogar al reo, y ponerlo, si así procediere, en consejo de guerra; lo cual, en el mismo memorial, autorizándolo con firma entera, se decreta, *como se pide*, formando éste luego cabeza de proceso.

En funciones ya el juez instructor, nombra escribano á un sargento, cabo ó soldado, á quien recibe juramento de cumplir fielmente con su deber.

Si el reo no está ya preso, procurará su captura, respecto de la cual, tendrá presente el decreto de Córtes de 11 de Setiembre

de 1820, y los arts. 2.° al 5.° de la Constitucion de 1869. Si no puede ser habido, llamado por edictos y pregones, segun práctica, y al tenor de la Ordenanza (art. 1.° y 2.°, título 12, trat. 6.°), se continuará el proceso, y de elevarse á plenario, sentenciará el Consejo en rebeldía, sin perjuicio de ser aquel oido, si es habido, ó se presenta, y suspendiendo entre tanto la ejecucion de sentencia.

En la indagatoria no recibirá juramento al reo, al tenor del art. 291 de la Constitucion de 1812, correspondiente á su título 5.°, vigente como ley comun.

Reducido, como lo ha sido sucesivamente, el fuero militar, primero por los casos de desafuero; despues por la *unificacion* de fueros, anunciada en principio por las constituciones políticas, y convertida en derecho constituido por el decreto de 6 de Diciembre de 1868, el juez fiscal, como á su vez el consejo de guerra, y las respectivas autoridades militares, lo tendrán muy presente, antes de autorizar, ó instaurar procedimiento, contra quien no proceda, ó proceda en diversa forma.

Puede suceder, que con el reo militar, resulten implicadas personas de otro fuero, aun del eclesiástico; ó que se descubran otros crímenes, que el que dió causa al procedimiento. El fiscal no se detendrá, y estenderá la instruccion á todos los hechos y á todos los complicados, sin perjuicio de remitir á su tiempo el tanto de culpa, con el reo en su caso, al juez ó autoridad que corresponda. Por eso á las declinatorias é inhibitorias, que puedan interponerse, responderá que *á su tiempo*, y en todo caso, dará conocimiento al capitan general ó superior militar correspondiente, para que resuelva.

Recibida la indagatoria, y evacuadas las citas pertinentes y posibles, examinados los testigos, antes de proceder á la confesion del reo, por medio de oficio pedirá el fiscal al coronel ó jefe del cuerpo una nota de todos los oficiales subalternos, que estén en disposicion de ser defensores, no incluyendo, en ningun caso, los de la compañía del reo (Real órden de 17 de Julio de 1800). Si éste no tiene allí su regimiento, la lista se pedirá á la autoridad superior de la plaza, con relacion á todos los cuerpos de ella (Real órden de 30 de Octubre de 1781).

De la lista se dará conocimiento al reo, por ante escribano, para que elija. Si se obstina en no elejir, se nombrará defensor de oficio, comunicándolo en forma al elegido ó nombrado; pero despues de la confesion.

La Ordenanza previene que la defensa sea adecuada; y si por el contrario, fuese sofística y conocidamente encaminada á embarazar, puede el defensor ser castigado, como infractor de la misma (art. 39, tit. 5.°, trat. 8.°).

Por la antigua Ordenanza, la causa se entregaba al defensor, por término de 24 horas; pero despues se ordenó, muy justamente, que lo fuese por el tiempo, que pareciese indispensable. (Real órden de 3 de Noviembre de 1729.)

Por los apuros de la guerra, se ordenó provisoriamente, en 17 de Noviembre de 1837 que, ocurriendo el caso, donde no se hallasen cuerpos militares, pudieran ser defensores los oficiales retirados con sueldo, y sucesivamente los retirados con solo uso de uniforme y fuero, y á falta de todos, los oficiales de la milicia nacional.

Reputándose el cargo de defensor acto de servicio, el elegido ó nombrado no puede escusarse sin grave causa, sobre la cual solo decidirá el capitan general, quien, segun el motivo, puede relevar al defensor ó darle acompañado. (Real órden de 22 de Julio de 1801.)

Ni pueden escusarse los oficiales de cuerpos facultativos, en su caso, porque el reo pertenezca á los cuerpos de línea. (Real órden de 23 de Febrero de 1815.)

Si el delito es grave, puede incomunicarse al reo, durante la confesion.

No está abolida en lo militar, como en lo civil, la *confesion con cargos*; pero deberá esta dirigirse con templanza, al tenor de la jurisprudencia general. Tampoco en ella se toma juramento al reo.

Si, durante ella, hace el reo alguna cita, que sea urgente evacuar, se verificará así; pero sin conocimiento, por entonces, de los testigos, ni del defensor, pues podria ser un ardid para burlar la incomunicacion.

Durante la confesion, puede el reo recusar al escribano, y el juez fiscal decidirá. Puede tambien recusar al juez fiscal, espresando ó no causa; pero éste, suspendiendo la actuacion, dará conocimiento al capitan general, acompañando el escrito. El capitan general ordenará que el reo esprese las causas, en que funda la recusacion, é instruyendo el espediente, resolverá.

Concluida la confesion, se comunicará al defensor su nombramiento, citándolo el juez fiscal, para jurar su cargo ante el mismo (Real órden de 11 de Octubre de 1723). Verificado, se procederá, con su citacion y asistencia, á ratificar á los testigos y evacuar las citas. Economizando los careos, por sus inconvenientes, en general, se verificarán los que se crean de todo punto necesarios; y asimismo el reconocimiento en rueda de presos, como está recibido en la práctica. Los testigos prestarán nuevo juramento al ratificarse.

Las declaraciones de los testigos fallecidos ó de ignorado paradero, se abonarán con dos testigos de conocimiento personal. Los ausentes, cuya presentacion ofrezca dificultad, se examinan por exhorto, que antes se remitia á los jefes locales de cuerpo y á la justicia ordinaria; en el dia, al capitan general, que ordena su ejecucion. (Real órden de 4 de Abril de 1839.)

No se rehusarán al reo los legítimos medios de defensa, que sean necesarios, y no conocidamente dilatorios.

En tal estado, el fiscal remitirá el proceso al capitan general, y en su caso al gobernador ó comandante general, para que, con acuerdo de su auditor ó asesor, aprueben su conclusion, ó prevengan, si algo hay que enmendar, suplir ó ampliar.

Devuelta la causa al fiscal, y evacuado, si algo se previene, formulará su dictámen espositivo y sólidamente razonado, y mandará entregar el proceso al defensor, para que se imponga por breve tiempo, que antes era de solas 24 horas, y hoy por el que el caso requiera. Por la Ordenanza se entregaba la causa al defensor, antes que el fiscal formulase su dictámen, cuya inconveniencia fué despues corregida, mandando lo contrario, como queda dicho. (Reales decretos de 22 de Noviembre de 1821; 8 de Enero de 1822, y 13 de Junio de 1836.)

El escribano dará fé de haberse entregado y devuelto íntegro el proceso: si por el contrario, se nota falta ó enmienda en sus fólios ó contexto, se dará cuenta de ello al capitan general ó jefe superior militar, esperando su resolucion.

Devuelto y evacuado, en su caso, lo que se prevenga, dará el fiscal conocimiento de su estado al coronel ó jefe del cuerpo, para que, ya por eleccion, ya por el turno que hay establecido en algunos cuerpos, designe y haga publicar en la órden del dia, los capitanes, que hayan de formar el consejo.

Enterado de ello el fiscal, pasará á pedir permiso para celebrarlo al capitan general, si á él presentó el memorial, de que procede su nombramiento; y en otro caso, al gobernador ó comandante de la plaza, que debe presidirlo; y en campaña al general en jefe ó jefe superior militar del campamento, en que estuviere el regimiento. (Ordenanza, art. 27. tít. 5.°, tratado 8.°)

Si por graves ocupaciones del servicio ó imposibilidad física, ó de otro órden, no pudiese presidir el consejo el jefe superior, á quien corresponda, lo verificará en su lugar el teniente de Rey; por imposibilidad de éste, el jefe de los cuerpos de la guarnicion, á quien por su grado y antigüedad corresponda. (Real órden de 9 de Marzo de 1773 y 10 de Julio de 1787.)

Luego que el fiscal tenga permiso para la celebracion, comunicará por oficio su nombramiento á los capitanes, señalándoles dia, hora y lugar para reunirse, á fin de que concurran á la casa del jefe, que haya de presidirlo, y señalándoles la hora de la misa del Espíritu Santo, á que deben concurrir (artículo 28, id., id.).

Ya queda indicado que no pueden formar parte del consejo los oficiales de la compañía del reo (art. 50, id.); tampoco el padre, suegro ó yerno del defensor (Real órden de 24 de Enero de 1769 y 17 de Noviembre de 1796); ni pueden serlo dos hermanos, como tampoco pueden ser uno vocal y otro fiscal. (Real órden de 24 de Agosto de 1789.)

Si el delito fuera contra órdenes de una plaza, contra la seguridad, tranquilidad ó mejor servicio de ella, el consejo se compondrá de capitanes de los cuerpos de la guarnicion de la misma. (Ordenanza, art. 31, dicho título y tratado.)

El consejo se constituirá, ocupando la derecha del presidente el vocal mas antiguo, y siguiendo por órden rigoroso de antigüedad, hasta ocupar la izquierda del mismo el mas moderno. Sobre la mesa estarán las Ordenanzas y adiciones (art. 36, id., id.). El fiscal tendrá lugar en la mesa á la izquierda del presidente, y sobre ella la causa y cuerpo material del delito. El presidente y vocales estarán cubiertos, y estándolo asimismo el fiscal, dará lectura íntegra al proceso, concluyendo con su dictámen (art. 38, id., id., id.).

Por Ordenanza (art. 39, id., id., id.) era el fiscal tambien el que leia la defensa; pero por práctica y por mayor conveniencia, sin duda, la lee el defensor, estando descubierto.

De pié y descubiertos, asistirán al juicio, para propia instruccion y prévia órden que se habrá dado, los oficiales y cadetes que se hallen francos de servicio (art. 37, id.).

En este estado, el presidente espondrá el objeto del juicio y cuanto sobre ello crea conducente: los vocales pedirán las esplicaciones, que estimen oportunas, y el fiscal satisfará á todo.

Acto contínuo es conducido el reo, custodiado, sujetos los brazos ó desatados, segun sea necesario, y descubierto, se sentará en el banquillo, sin respaldo, que le está destinado. El presidente pregunta enseguida de qué crímen está acusado, si lo ha cometido, qué motivos le indujeron á ello y qué tiene que espresar en su defensa (art. 42 y 43, id.).

Toda manifestacion, esplicacion ó incidente, que se ligue al juicio, y pueda luego ilustrar mas y mas al capitan general y su auditor, y en su caso, al Consejo ó Tribunal superior de guerra, á quien haya de elevarse el proceso, será anotado en este.

Concluido el juicio, el reo es vuelto á la prision, y se manda despejar á todos los que no tienen parte en la causa (art. 43, id.). Verificado, el presidente propondrá lo que estime procedente, en cargo ó descargo del reo, como harán á su vez los vocales (art. 44, id.); despues de cuyo trámite, ordena aquel que se pase á la votacion, que empezará por el mas moderno, acabando en el presidente. El voto de éste, cuando no es de muerte, vale por dos; si es de muerte, por uno solo (artículo 45, id.).

Cada vocal, puesto de pié y descubierto, declara, en su caso: que hallando convencido al reo del delito por que se le somete al consejo, le condena á tal pena; no hallándolo convencido, lo absuelve; y si halla razones, que hacen perpleja la cuestion, propone que se amplie la sustanciacion sobre puntos, que determinará, y que entretanto el encausado continúe preso (art. 46).

Cada vocal escribe su voto y lo firma con firma entera (art. 51).

Si hubiera un voto mas á muerte, que á otra pena menos grave, ó á ser absuelto, sufrirá la muerte el reo (art. 52, id.).

Si se dividen los votos entre varias penas; ó en dos y la absolucion, y la pena de muerte tiene tantos votos, como el número que componen los que salvan la vida, sufrirá el reo la que de estas reuna mas votos (artículo 53, id.).

Si la mitad de votos fuera de pena de muerte, y la otra mitad se dividiese en penas á vida, se impondrá al reo la mas grave de estas (art. 54, id.).

Fijada así la pena, el fiscal hará estender la sentencia, que se firmará por todos, aun los vocales que han votado en contra de ella, y sin hacer mencion de esta circunstancia (art. 56).

Si entre dos reos, hay que sortear la pena de muerte, el que salve de ella, sufrirá la pena de diez años de presidio. (Real órden de 8 de Noviembre de 1760.)

Aunque en las actuaciones aparezca culpable algun oficial, el consejo ordinario es incompetente para juzgarlo, y se limitará á remitir el tanto de culpa al capitan general, para los efectos oportunos. (Real decreto de 14 de Mayo de 1804.)

Si el defensor falta en su defensa á la ver-

dad, ó á lo que prescribe la Ordenanza, ó si ha maltratado al fiscal, puede el consejo hacerle entrar para la prevencion oportuna. Si lo reconociere, y si apareciese que ha procedido de buena fé, se le permitirá retirar su escrito y reformarlo. Si sostuviere lo dicho, y el fiscal pidiera satisfaccion, se dará conocimiento al capitan general, para lo que proceda.

Está prohibido fundar las sentencias en motivos estraños al proceso. (Real órden de 20 de Marzo de 1844.)

El consejo de guerra no puede señalar al reo el establecimiento penal, en que ha de cumplir su condena, lo cual corresponde solo al capitan general. (Real órden de 6 de Febrero de 1784.)

En todos los casos, la sentencia será remitida al capitan general, quien la pasará á su auditor. Si este la halla válida y justa, y el capitan general se conforma, se devuelve al fiscal, para su ejecucion.

En el caso contrario, y siempre que el capitan general disienta del auditor, remitirá el proceso al Supremo Tribunal, ó Supremo Consejo de la Guerra, y la resolucion que este dictare será sentencia firme. Si el consejo se ha celebrado en provincia, se remitirá la sentencia del mismo al gobernador militar, ó comandante general, y por éste al capitan general. (Acordada del Supremo Consejo de la Guerra, 22 de Octubre de 1776.)

El capitan general tiene autoridad para suspender, ó hacer otra demostracion, al vocal, que en su voto hubiera manifestado debilidad ó apartádose de la Ordenanza (art. 59, id.).

De la sentencia firme dará conocimiento el fiscal al coronel ó jefe del cuerpo. Si la sentencia fuese de muerte, pedirá permiso al capitan general para ejecutarla.

Sobre la ejecucion en este caso, véase su artículo.

Conviene tener presente: 1.° que los vocales del consejo no pueden votar que el proceso se remita al capitan general, ni á otro centro ó autoridad superior; sino como ya hemos insinuado, condenando, absolviendo, ó proponiendo ampliacion de diligencias, espresándolas. (Acordada del Supremo Tribunal de Guerra, de 22 de Octubre de 1774.)

2.° Que no pueden ser recusados los capitanes generales, ni los gobernadores, como tampoco los auditores ó asesores. (Real órden de 23 de Junio de 1803.)

3.° Que, si para el hecho que se juzga, no hay pena en la Ordenanza, ó es tal, que no puede aplicarse, se aplicarán las del derecho comun. (Acordada citada.)

Y 4.° Que habiendo de sortearse la pena de muerte entre dos reos, si el uno de ellos tiene iglesia, no hay términos hábiles para el sorteo con el otro; sino que éste sufrirá la de muerte; y aquel la de diez años de presidio. (Consulta del Consejo Supremo de la Guerra, de 8 de Noviembre de 1770.)

Consejo de guerra estraordinario. Es mas bien un caso particular del consejo ordinario; pero su denominacion es así, desde la Real órden que fijó y determinó sus formas. Es aquel, en que los reos, aunque de la clase de tropa, tienen grado de oficial, lo cual exige ya miramientos especiales. Como queda insinuado, la naturaleza y pormenores de este consejo, están en la Real órden de 18 de Abril de 1799, que dice así:

«Art. 1.° Para formalizar el proceso en guarnicion ó cuartel, solicitará el comandante de las armas la órden del capitan ó comandante general de la provincia ó ejército, y en campaña la impetrará del general en jefe.

»Art. 2.° Deberá actuar el proceso el sargento mayor del cuerpo, ó el ayudante, que ejerza sus funciones; y se nombrará por escribano de la causa un sargento. Si el reo no tuviese cuerpo asignado, ó se hallare donde este no resida, nombrará el gobernador ó comandante de las armas para fiscal, á uno de los sargentos mayores de la guarnicion, practicándose respectivamente lo mismo en campaña.

»Art. 3.° El consejo de guerra, que haya de juzgar al reo, se llamará *estraordinario*, y precederá, para su convocacion, el permiso del capitan ó comandante general: pero, ni la sustanciacion del proceso, ni el nombramiento de jueces, que hayan de componerlo, se diferenciará en cosa alguna de lo que previene la Ordenanza, para los delitos

comunes de la tropa y consejos de guerra ordinarios.

»Art. 4.° El reo tendrá el arbitrio de no comparecer en el consejo; pero si lo hubiese de verificar, será conducido por un oficial, y tendrá un taburete por asiento.

»Art. 5.° Dada y estendida la sentencia, se pasará el proceso al capitan ó comandante general para su resolucion, y en los casos que comprenda la pena de privacion, degradacion ó muerte, deberá este jefe consultarla á S. M. con remision de la causa, así como lo practicará, cuando no se conforme con el definitivo del consejo.

»Art. 6.° Serán castigados estos reos con las mismas penas de Ordenanza, señaladas para los sargentos, cabos y soldados; pero, por consideracion correspondiente al carácter de oficial, deberán conmutarse en presidio las de obras públicas ó arsenales, variando proporcionalmente las indecorosas, aunque sin disminuirlas en lo grave.

»Art. 7.° Prestarán el juramente bajo palabra de honor, y serán reputados en la clase de nobles, para la imposicion de las penas prescritas en las pragmáticas y leyes del Reino, sin distincion entre aquellos y los plebeyos.

»Art. 8.° Nunca se les podrá imponer pena señalada á la clase de oficiales, como no estén empleados con el carácter de tales.

»Art. 9.° Tampoco podrán ser depuestos de su empleo, ni despedidos del servicio, sin espresa órden de S. M.

»Art. 10. Los comandantes de los cuerpos conservarán la facultad de hacerles formar sumaria, segun la actual práctica, por los delitos ó faltas, que no exijan proceso; pero se dirigirán al inspector general, quien deberá acompañarlas á S. M. con su dictámen, siempre que crea corresponder la pena de privacion de empleo ó de presidio.»

Consejos de guerra ordinarios de cuerpos privilegiados. Lo fueron en su dia, los de la Guardia Real *esterior*, é *interior*, y los de Guardias de Corps ó de la Real persona, y Alabarderos; pero como esta no tenia consejo de guerra, sino un juzgado *privativo*; y aquella se regia por su Ordenanza especial (de 2 de Diciembre de 1775), y declaraciones particulares posteriores, habiéndose prevenido en Real decreto de 2 de Mayo de 1824, que la espresada guardia se rigiese por dicha su Ordenanza especial y sus adiciones y aclaraciones, y en lo que ellas no alcanzaren por las Ordenanzas generales del ejército; por ello el órden de la justicia de estos cuerpos, no formará parte de este artículo, y sí de los suyos particulares y relativos.

Lo propio se verifica con otros cuerpos especiales, y en cierto modo *privilegiados*, que hemos tenido ó tenemos, como las *milicias provinciales*, que en campaña se regian, en lo judicial, por la Ordenanza general del ejército; y en provincia, por un juzgado privativo: las milicias de Ultramar, que tienen un reglamento especial: la guardia civil, etc. Limítase por tanto el presente artículo á los cuerpos privilegiados por antonomasia, de artillería, ingenieros y marina.

Antes de tratar de cada uno, dirémos, como doctrina comun á todos ellos, que en lo que no prevengan en punto á justicia sus Ordenanzas y reglamentos especiales, han de atenerse á la Ordenanza general del ejército; y por Real órden de 10 de Junio de 1838, está prevenido que en el procedimiento judicial, se atemperen en cuanto sea posible, á dicha Ordenanza general, y á la Real aclaratoria de 10 de Agosto de 1787.

Artillería. Con presencia de todo lo dicho, en esta arma, supuesto el conocimiento y autorizacion del jefe superior, el consejo se celebrará en casa del comandante del cuerpo, y bajo su presidencia; salvo si fuese oficial de la compañía del reo, ó por otro impedimento legal, en cuyos casos, presidirá el consejo el gobernador de la plaza, como si fuera comandante de artillería, segun Real cédula de 26 de Febrero de 1782 (art. 7.°).

Si el consejo es ordinario, finalizado que sea, lo remitirá el comandante á su asesor, y con su dictámen, aprobará ó suspenderá la sentencia. En el primer caso, será ejecutada: en el segundo, continuará suspendida, remitiendo el proceso íntegro á S. M. con esposicion de motivos. (Ordenanza especial, reglamento 14, art. 12.)

Si no hay suficiente número de capitanes del arma, se suplen con los de igual clase de ingenieros, y en caso defectivo del ejército.

Ingenieros. El consejo se formará lo mismo. Prévia la autorizacion del jefe militar, lo presidirá el comandante de ingenieros, salvo impedimento, segun lo dicho de artillería. Pronunciada sentencia, el que haya presidido el consejo, remitirá el espediente á su asesor, con cuyo dictámen tambien aprobará ó suspenderá la sentencia. En el primer caso, será ejecutada; en el segundo, remitirá el proceso, con esposicion de razones, al ingeniero general, que, con dictámen del asesor general, aprobará y mandará ejecutar la sentencia, ó elevará el proceso con esposicion razonada á S. M. para la resolucion conveniente. (Ordenanza de ingenieros, reglamento 10, artículo 13.)

Marina. En la marina, el consejo de guerra ordinario se diferencia algo mas en pormenores del de ejército, y aun de los demás cuerpos tambien privilegiados, por lo que en dicha arma tienen mas de especiales sus servicios y situaciones.

En tierra y no estando de guarnicion, se dá cuenta del delito y se espide autorizacion para la instruccion del proceso y celebracion del consejo de guerra en su caso, al comandante general de la escuadra ó departamento.

Estando de guarnicion, se pide la autorizacion al gobernador de la plaza, como en los demás cuerpos del ejército. (Ordenanza de marina, tít. 3.°, art. 35.)

A dichas autoridades, en sus respectivos casos, se pide la órden para el nombramiento de vocales del consejo, que siempre serán en número impar, no menos de siete, y ninguno de la compañía del reo. Se elegirán de los tenientes de navío sueltos, capitanes de infantería de marina, ó jefes de brigada: á falta de estas clases, subalternos que no tengan menor edad de 22 años cumplidos.

Presidirá el consejo el comandante particular del cuerpo del reo; y si éste lo es del cuerpo general de la armada, un capitan de navío.

A bordo presidirá siempre el consejo el comandante del buque, de cualquier clase que sea el reo.

El oficial designado para vocal del consejo, no puede escusarse, sin causa evidente y legítima, pena de suspension de empleo; y el mayor general ó sargento mayor, que lo disimulen, serán severamente castigados. (Ordenanza de marina, trat. 5.°, tít. 3.°, artículo 26.)

Si en el departamento, ó en la escuadra, fondeada en puerto de España, no hubiera suficiente número de oficiales de marina para el consejo, se pedirán los que faltan al jefe de la guarnicion, que no podrá rehusar este servicio, y deberán aplicar la Ordenanza y órdenes de marina (id. id. id, art. 27).

El comandante general de los batallones de marina presidirá el consejo, si lo tuviese por conveniente: en otro caso, el segundo comandante. Si es en departamento, en que no resida el comandante general, presidirá el comandante principal; y no pudiendo, el del batallon mas antiguo en el empleo de capitan de fragata. (Instruccion de 30 de Enero de 1787.)

Estando los batallones de marina de guarnicion en alguna plaza, serán considerados como cuerpos de la Casa Real, subordinados al gobernador. (Real órden de 12 de Setiembre de 1815.)

Celebrado el consejo, el proceso se remitirá al capitan general del departamento, para los efectos espresados, al hablar del consejo ordinario de guerra del ejército, con los propios resultados y trámites. (Ordenanza de marina, trat. 5.°, tít. 3.°, art. 45.)

Si la sentencia es de muerte, y ha de ejecutarse en tierra, se pedirá siempre permiso al gobernador ó jefe superior de la plaza; quien lo concederá, á no ser que la tropa de marina se halle fuera de su departamento. (Ordenanza de la armada, trat. 5.°, tít. 3.°, art. 51: y Real órden de 8 de Octubre de 1771.)

Si el consejo se ha verificado á bordo, y se cree de necesidad para el debido escarmiento que la sentencia se ejecute sin esperar á llegar á puerto, así se verificará, cuyo caso y pormenores han de verse, (tít. citado de la Ordenanza, art. 51 y 52).

Hoy deben tenerse presentes, la ley de 4 de Febrero de 1869, creando el *Almirantazgo*, por la alteracion de denominaciones en la oficialidad de marina, y la de 23 del Abril del propio año, creando el Tribunal del Almirantazgo, que en este asunto ha sustituido al Tribunal supremo de Guerra y Marina, relativamente á esta.

Consejo de guerra de oficiales generales. «Por lo que toca á *crímenes militares* y *faltas graves*, en que los oficiales incurran, *contra mi Real servicio*, es mi voluntad que se examinen en junta de *oficiales de superior graduacion*, dándose á este tribunal la denominacion de *Consejo de guerra de oficiales generales.*» (Art. 1.°, tít. 6.°, trat. 8.°, de la Ordenanza general.)

En este artículo son de notar tres cosas: 1.°, la competencia del consejo: crímenes militares, y faltas graves en el servicio. Para otros delitos ó faltas es solo competente el capitan general con su auditor, y caso de desafuero, los tribunales comunes. Ni puede juzgar el consejo á otras personas ó clases que la de oficiales en el caso dicho. Consiguiente á ello, por Real órden de 8 de Enero de 1841 se declaró que el consejo no habia podido juzgar á un ayuntamiento. Ya, hablando del consejo de guerra ordinario, hemos dicho, que de resultar otras personas implicadas en el proceso, se remite á su tiempo el tanto de culpa á quien corresponda. 2.° Que pueden formar el consejo, no solo oficiales generales; sino tambien *de superior graduacion*, en cuyo caso se encuentran los brigadieres (véase **BRIGADIER**), y los coroneles, lo cual ha de entenderse en caso de necesidad. Y 3.°, que eso no obstante, el consejo se denominará *de oficiales generales*.

Y todavía añade el art. 2.° que, al formar el consejo, se atenderá á que el número «lo llenen, en el modo posible, oficiales generales; eligiendo, si estos no alcanzasen, *brigadieres*, y *en su defecto coroneles*; pero *nunca ha de descenderse de esta clase.*»

El cumplimiento de la Ordenanza, limitando la competencia del consejo á crímenes y faltas graves en el servicio, está reencargado por multiplicadas Reales declaraciones, como las Reales órdenes de 12 de Marzo de 1781: 23 de Abril de 1789: 14 de Mayo de 1801: 13 de Noviembre de 1811: 17 de Diciembre de 1841; y 31 de Mayo de 1846.

El consejo ha de formarse siempre en la provincia, en que el oficial presunto reo tenga su destino. Ha de ser presidido por el capitan general ó comandante general de ella, correspondiéndole tambien el nombrar los vocales del consejo, que siempre han de ser en número impar, sin bajar de 7, ni esceder de 15 (art. 2.°, id.). Suyo es tambien el ordenar la instruccion del proceso, en auto motivado, y el nombramiento de fiscal y secretario, que han de ser de la clase de oficiales. La órden servirá de cabeza de proceso (id., tít. 6.°, artículo 4.°).

Al consejo asistirá el auditor, aunque sin voto, y solo para ilustrar la opinion del presidente y vocales que le pregunten (id., título 6.°, art. 2.°).

Los coroneles que, en su caso, se nombren, han de ser, no meramente graduados, sino efectivos y actualmente empleados; y en su defecto, agregados á cuerpos ó plazas, y en último caso los retirados. (Real órden de 23 de Mayo de 1839.)

Los brigadieres han de ser nombrados por su antigüedad. (Real órden de 25 de Diciembre de 1795.)

Si el capitan general, ó comandante general en su caso, no pudiesen por imposibilidad ó justa causa presidir, nombrarán al oficial general mas caracterizado, para que presida, sin que pueda escusarse sin justa causa. (Ordenanza, art. 3.°, id. id.)

A este consejo están sujetos, como queda indicado, todos los oficiales, aun los de la mas alta graduacion (art. 4.°, id., id.).

El fiscal citará á declarar á los oficiales que hayan de ser testigos, desde teniente coronel inclusive arriba, á casa del capitan general ó comandante general en su caso; y, desde dicha graduacion abajo, á su posada (id., id., art. 7.°).

Los testigos serán examinados con separacion (id., id., art. 8.°).

Terminado el exámen de testigos, comparecerá el reo á ser interrogado, previniendo-

le que antes nombre defensor. Evacuada su declaracion, y no antes, podrán hablar el reo y el defensor, cuantas veces cada uno lo solicite. Despues, en dias separados, citará el fiscal á su casa á los testigos, para ratificarlos, y en su caso á careo con el reo, siendo todo con citacion del defensor (id., id., arts. 9.° y 10).

Todo evacuado, el fiscal pedirá al coronel la hoja de servicios del presunto reo y la unirá al proceso, remitiéndolo al capitan general, quien lo pasa al auditor ó asesor; y con la aprobacion de éste, ó los reparos que ponga, se devuelve al fiscal.

Este estiende su acusacion y la pasa al defensor del reo, para que formalice su defensa; y verificado, dá conocimiento al capitan general de hallarse el proceso concluido. Enterado aquel, el dia antes de celebrarse el consejo, cita por papeleta personal para su casa, á los oficiales generales, que lo han de componer, indicándoles la hora en que tendrá lugar la misa del Espíritu Santo (id., id., artículo 11).

Reunido el consejo, y ocupando la presidencia el capitan general ó comandante general, en su caso, se sentará á su izquierda el auditor, luego el fiscal, en seguida el vocal mas moderno, y así gradualmente hasta terminar en el mas antiguo á la derecha del presidente. Este tendrá delante de sí una mesa, y sobre ella una escribanía, campanilla y la Ordenanza general, y en su caso la especial del arma (id., id., art. 12).

Si el consejo quiere que asista el reo, ó si éste lo pide, será traido por un ayudante. Entrará sin espada, acompañado de su defensor, y tomando asiento en un taburete raso, espondrá, obtenida la venia, lo que crea conveniente á su defensa (id., id., arts. 15 y 20).

El presidente primero, y despues los vocales, preguntarán al reo lo que tengan por conveniente; hecho lo cual y leida la acusacion, aquel, esponiendo brevemente el motivo del consejo, anunciará que va á procederse á la votacion, en cuyo acto el defensor lee su defensa y se retira con el reo, empezando enseguida la votacion por el mas moderno y acabando en el presidente. Previene la Ordenanza, que los votos han de darse sin pasion y segun el conocimiento, honor y conciencia de cada uno (arts. 16 y 17).

El presidente tiene dos votos en favor de la vida y del honor; pero uno solo si vota á muerte (id., id., art. 19).

La mayoría de votos hace sentencia y han de firmar, aun los vocales que quedan en minoría. Aunque no haya comparecido el reo, no se hará de ello mencion en la sentencia (artículo 20).

El consejo tiene facultad de ejecutar la sentencia, que no sea de muerte, degradacion ó pérdida del empleo; pues estas han de consultarse con S. M. y esperar su resolucion, remitiendo el proceso original. Con la resolucion que recaiga, se devuelve este al consejo, que al efecto se reune de nuevo, sin que obste el que falten algunos vocales: dase cuenta de él y la resolucion del consejo es siempre, *cúmplase la voluntad de S. M.*, quedándose con copia, certificada por el fiscal, el capitan general (arts. 21, 22 y 23 id.).

Establecido con el tiempo el Supremo Tribunal de Guerra y Marina, en vez de remitir directamente á S. M. los procesos que prevenia la Ordenanza, se remitian á dicho Tribunal, como despues á los centros supremos de jurisdiccion de guerra y marina, que le han sucedido; y ya consultando á S. M., si lo estima necesario, ya sin consultar, se comunica la resolucion definitiva al consejo de guerra ó á quien corresponda, con el proceso original. (Reales decretos de 31 de Julio de 1835 y 20 de Setiembre de 1836.)

Los procesos, cuya sentencia puede ejecutar por sí el consejo, una vez ejecutada, se remiten tambien á S. M. por el Ministerio de la Guerra, quedándose con copia el presidente del consejo. Alguna vez sucede, y nada se opone á ello, y menos con un Ministro de la Guerra responsable, que el proceso se remita á informe del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, ú otro centro supremo, que le sustituya, para que examine, si los vocales del consejo se han sujetado á la Ordenanza, como deben, y que, dejando intacta la cosa juzgada, proponga la correccion á que pue-

den haberse hecho acreedores: práctica conveniente y que se parifica con la del Gobierno en los casos del derecho comun, mandando á veces los procesos fenecidos al Tribunal Supremo de Justicia, para que, dejando intacta la cosa juzgada, informe lo que estime conveniente en vias de jurisprudencia, ó proceda á lo que haya lugar en justicia.

Caso de salir absuelto el procesado, se le pondrá luego en libertad. (Ordenanza, artículos 22 y 23, id. id.)

Los procesos esceptuados, devueltos con resolucion de S. M., se remiten á la capitanía general de la provincia, en que se formó el consejo, circulándose por aquella copia de la sentencia á las demás capitanías generales (art. 24, id. id.).

Lo relativo á la ejecucion de las sentencias corresponde á otro artículo, advirtiendo que el fiscal continúa autorizando los procedimientos hasta la conclusion. Notaremos tambien que la pena de degradacion, aunque de Ordenanza, puede considerarse en desuso.

APÉNDICE.

Hasta aquí, los consejos de guerra, que podemos llamar *normales*, por proceder de las respectivas Ordenanzas, y Reales disposiciones aclaratorias. Pero esos mismos consejos, por exijencias perentorias de la disciplina, ó de órden público, tienen aplicacion mas ó menos conforme á la normalidad mencionada, y debemos hacer de ello alguna referencia.

Consejos de guerra de órden de S. M. La Ordenanza no formula estos consejos; pero consigna una indicacion que les sirve de base. Dice en esta razon el art. 6.°, tít. 6.°, trat. 8.° de la misma: «Si procediese de *órden mia* la providencia de convocar el consejo de guerra de oficiales generales, se variará el precedente formulario (el de la Ordenanza para proceder á la formacion del consejo), con relacion á mi real determinacion, en los términos que corresponda.»

A esta base se han unido siempre la conveniencia ó la justicia, ya para tranquilizar la opinion, ya para acrisolar la lealtad y la justicia de uno ó muchos jefes militares. Sucede lo primero, cuando de una campaña, accion ó empresa militar desgraciada, se sigue una gran pérdida para el país, ó lamentables peligros para el mismo, sin culpabilidad ostensible sin embargo; y sucede lo segundo, cuando un jefe pundonoroso ha sido desgraciado, y ve sobre sí la censura de la opinion, ó demostraciones disciplinarias depresivas, y ocurre en consecuencia á S. M. rogando se esclarezca su conducta en consejo de guerra. S. M., como en casos bien notables lo hemos visto, lo ordena así, y el consejo se forma, no porque haya delito conocido, que es el caso de la Ordenanza; sino por si resulta, ó para que se evidencie que no lo hay: y el resultado es, si aparece delincuencia, la aplicacion penal de la Ordenanza, y por sus trámites; en el caso contrario, la conveniente declaracion honrosa del sometido al consejo.

Hay alguna real resolucion que prohibe á los oficiales pedir formacion de consejo de guerra, cual es la ya citada de 25 de Abril de 1789; pero, como en ella se ve, es cuando no se trata de *crímenes y faltas graves contra el servicio*; sino de faltas de otro género, corregidas disciplinariamente, en cuyo caso la reclamacion del interesado es como una protesta, mas ó menos temeraria, contra demostraciones procedentes. Por lo demás, no habria justicia en prohibir, en absoluto, á un oficial pundonoroso, desgraciado tal vez, y que se cree castigado inmerecidamente con menoscabo de su honra, el defenderla, invocando para ello los medios de justicia, ya recurriendo á S. M., ya en debida forma, á su jefe inmediato, pidiendo formacion de causa ó de espediente.

Consejos de guerra verbales. Impuestos en momentos críticos ó supremos por la ley de la necesidad, se infiere bien que han de ser un poco violentos. A bordo, en campaña, en marcha de tropas, con el enemigo á la vista, en una plaza sitiada, y en situaciones militares análogas, se comete á veces un crimen, que para prevenir males inminentes, exige un pronto y ejemplar castigo. En tal caso, el jefe militar respectivo reune momentáneamente, y como es posible, consejo de guerra, nombrando fiscal y secretario. Por acta, que hace estender y autoriza el fiscal, y teniendo

presente al reo, si fuere dado, interrogado por los vocales y puesto en evidencia el crimen, su trascendencia perentoria y la persona del delincuente, y ordenándole que nombre defensor; y de no hacerlo, nombrándoselo, el fiscal formula sus cargos y acusacion, y el consejo, oido el defensor, dicta sentencia, que el comandante, con acuerdo del consejo, hace ejecutar.

Aumenta la gravedad de estos consejos el que, por lo comun, son necesarios, cuando la pena indispensable y perentoria es la de muerte.

Los crímenes, que suelen ocasionarle, son los de traicion, rebelion, sedicion, conjuracion, y en su caso, los contenidos en los artículos 36, 44, 43, 46 y 117 del tít. 10, tratado 8.° de la Ordenanza general.

Si en el punto hubiere auditor ó asesor, convendrá que asista al consejo, aunque solo con voto consultivo.

A veces la necesidad de estas tremendas justicias ocurre de improviso en campo abierto, deteniendo su marcha el cuerpo de tropas, que no la continúa hasta que se ha dictado sentencia y ejecutado, presenciando la ejecucion. Hemos indicado tambien que tal caso puede sobrevenir á bordo.

No siempre es posible reunir el número legal de oficiales y de la clase correspondiente. Entonces la necesidad, que ha impuesto la ley, la agrava aun, y en vez de consejo, no puede celebrarse sino junta de jefes ó de oficiales. De cualquier modo, el comandante militar que se halle en este penible caso, debe cubrir, hasta donde sea dado, todas las formas, lo cual será cubrir su responsabilidad. Ejecutada la sentencia, con comunicacion esplicativa del hecho, remitirá el espediente original al jefe superior de la fuerza ó general de que dependa, quedándose con copia autorizada por el fiscal.

Consejos de guerra permanentes. Esta es la circunstancia que los diferencia de los normales, ó consejos de Ordenanza; y es que estos, como hemos visto, son de ordinario casuísticos y personales; salvo los de plaza sitiada, que tambien son permanentes, si así lo determina el gobernador ó comandante general de ella, por cuanto, segun la Ordenanza, lo que manda en tal concepto y situacion tiene fuerza de ley.

En otra circunstancia se diferencian los consejos permanentes de los normales, y es que éstos se forman para perseguir y castigar delito ya cometido; los permanentes para alguno ya cometido y los que se cometan.

A dos pueden reducirse las clases de consejos permanentes: algunas veces, por estado efectivo de guerra de una ó mas provincias; otras, por causa de órden público perturbado ó comprometido, puestas en riesgo las haciendas y las vidas por cuadrillas de bandidos y malhechores. En uno y otro estado, la aplicacion de los consejos de guerra, segun los determina la Ordenanza, ha sido en algun caso autorizada por la ley, en estado efectivo de guerra, por pacificacion necesaria; en el estado de sitio en una plaza; en las perturbaciones del órden público especiales, como las que son objeto de las leyes recopiladas (título 17, lib. 12, Nov.), y las conocidas de la ley de 17 de Abril, hoy ya sustituida, contra sediciones y rebeliones.

En estos casos, el consejo de guerra era en su forma el de la Ordenanza general. Posteriormente el de la ley de órden público de 24 de Abril de 1870, es de una clase especial, pues se formará de *cuatro capitanes* nombrados por la autoridad militar, *el juez de primera instancia, el de paz* y *el promotor mas antiguo* en la cabeza del partido en que se celebre el consejo (art. 23).

Los consejos de guerra contra malhechores se han llamado á veces *comisiones militares*, establecidas por Reales órdenes ó decretos, de los cuales recibian su norma, lo cual todo ha de verse con mayor estension en los artículos **COMISIONES MILITARES**: **ESTADO DE SITIO**: **ESTADO DE GUERRA**.

CONSEJO SUPREMO DE LA GUERRA. No es conocido su orígen. Silva, en su *Catálogo Real* (cap. 34), supone que viene desde D. Pelayo, y á este dicho, puramente conjetural, se refieren varios autores. No puede dudarse que en un Estado, por tantos tiempos belicoso, y en que por las luchas seculares eran precisas y entraban

por tanto las huestes armadas, la necesidad misma impondria la formacion de un autorizado centro directivo y consultivo; y cualquiera que fuese el nombre que llevase, cuando para este género de instituciones prevalecia en España la enunciacion de consejo, se comprende bien que así se aplicaria en el ramo de la guerra.

Con varias vicisitudes llegó á su mayor esplendor en los tiempos de Felipe V, que por Real decreto de 23 de Abril de 1714, le dió ámplia organizacion, recibiendo entonces este centro la calificacion de Supremo.

Por la nueva planta se componia de diez y seis ministros, seis militares y seis togados, un fiscal, dos abogados generales y un secretario en jefe.

Por otro decreto, de 23 de Agosto de 1715, se varió aquella organizacion, y debió componerse de diez ministros, seis militares y cuatro togados, un fiscal y un secretario.

Por resolucion de 5 de Junio de 1744, se le restableció á su antigua planta y al régimen que tenia antes del año 1713, mandándose en su consecuencia que los tres ministros togados, que servian en él, pasasen al Consejo de Castilla, y que solo concurriesen, como ministros fijos del Consejo de Guerra, los de capa y espada, con asistencia, en tres tardes de la semana, de los tres ministros del Consejo de Castilla, á quienes se nombró por asesores para las dependencias de justicia.

Por Real cédula de 1773, recopilando resoluciones particulares, adoptadas en diferentes épocas, vino á fijarse de una manera precisa, tanto la planta del Consejo, como sus atribuciones y el órden del procedimiento. Segun ella, y partiendo del principio de que la presidencia habia de corresponder siempre á la persona del Soberano, este cuerpo habia de constar de veinte consejeros, diez natos y diez de contínua asistencia, el fiscal togado, otro militar y un secretario. Se declaraba consejeros natos: al secretario del despacho universal de la guerra; al capitan mas antiguo de Reales Guardias de Corps; al coronel mas antiguo de Reales Guardias de infantería; á los inspectores generales de infantería, caballería y dragones; á los comandantes generales de artillería y de ingenieros del ejército, y á los inspectores generales de marina y milicias; debiendo ser los consejeros de contínua asistencia dos oficiales generales de tierra y otros dos de marina, un intendente de ejército y otro de marina, cuatro ministros y un fiscal letrados, otro fiscal militar y un secretario, que precisamente hubiera servido en el ejército; concediendo á los dos fiscales el carácter y honores de consejeros.

Las atribuciones del Consejo se estendian al conocimiento y decision de todas las causas civiles y criminales, que de cualquier modo pertenecieran al fuero de guerra, y á todas las clases de los ejércitos de mar y tierra, inclusas las tropas de la Casa Real, artillería y milicias, salvando los privilegios concedidos al cuerpo de Reales Guardias de Corps, á los regimientos de Reales Guardias de infantería, Real brigada de carabineros, y al cuerpo de artillería, para la actuacion y sentencia de sus causas en primera instancia. Le competia tambien, en el grado correspondiente, el conocimiento de todos los negocios relativos á cualesquiera personas que, por ordenanzas, decretos, órdenes ó contratos, tuvieren declarado el fuero militar: el de los asuntos meramente contenciosos, tocantes á sorteos, fortificacion, presidios, construccion de bajeles, astilleros y montes de Marina, fundiciones de artillería, fábricas de armas y municiones, corso de mar, infraccion de los tratados de paz, espías, estranjeros transeuntes, utensilios, alojamientos de tropas, sus hospitales, asientos de ellos, de víveres, vestuarios y demás pertenecientes al ejército y armada; y finalmente, el de cuantas materias y causas le correspondian en el concepto de contenciosas, conforme á las últimas ordenanzas militares y de marina; debiendo, no obstante, remitir á las justicias reales el conocimiento de los negocios de mayorazgo, como hasta entonces se habia verificado, y tambien el de los patrimoniales de los militares, cuyos herederos no lo fuesen, ni gozasen del fuero de guerra; y continuar á su cargo la direccion del monte-pío militar, segun su

particular reglamento y órdenes especiales, referentes á esta institucion.

Se incorporaron tambien al Consejo las asesorías de la tropa de la Casa Real y Marina, como asimismo la delegacion de caballería del reino y la comision de juez de presidiarios, quedando por tanto atribuido al mismo el conocimiento de los negocios de estos diferentes ramos. Se ordenó que se dividiera en dos salas, la primera de gobierno y la segunda de justicia. En la primera, compuesta de los consejeros militares, del togado mas antiguo, los intendentes y fiscales, con el secretario, debian tratarse las materias consultivas y los espedientes, así civiles como criminales, de la inspeccion del Consejo, que pudieran determinarse por Ordenanzas. En la segunda, formada por el subdecano, presidente, y en su defecto el general que le siguiera en grado ó antigüedad, y por los otros tres ministros togados, se habian de sustanciar y determinar todas las causas, así civiles como criminales, que por cualquier razon fueran de la competencia del fuero militar, y que por ser contenciosas y entre partes, debian resolverse conforme á leyes y Ordenanzas. En ambas salas debia oirse la voz y dictámen de los fiscales, especialmente del togado, siempre que se interesaran las regalías de la Corona, ó el bien de los pueblos. Los jueves de cada semana, y en el caso de ser festivos, el siguiente dia, debian asistir todos los ministros natos, con los demás consejeros, y tratar con preferencia los asuntos que el Rey hubiera remitido para que se vieran en Consejo pleno, como los consultivos sobre dudas de Ordenanzas, y los que por su naturaleza y circunstancias lo exigieran, ó que alguna de las dos salas hubiera reservado á la decision de todo el tribunal.

Tambien esta planta fué modificada por Real cédula de 16 de Mayo de 1803. En ella manifestaba el Soberano el deseo de que las clases militares disfrutasen del beneficio de la pronta administracion de justicia, y considerando que la última planta dada á este cuerpo, y su estado á la sazon, no respondian á esta aspiracion del Soberano, puesto que muchos de sus individuos solo tenian la plaza de consejeros en comision, y no como empleo, advirtiéndose atraso en el despacho de gran número de negocios, que reconocia por causa la multitud de vocales y la division de asuntos, cuya espedicion es mejor y mas rápida, cuando se confia á un número menor, siempre que se dediquen á ellos contínua y esclusivamente; se suprimió la clase de consejeros natos, y se dispuso que en lo sucesivo solo hubiera consejeros de contínua asistencia, en el mismo número de diez; pero de ellos, seis generales y los cuatro restantes togados, con un fiscal militar, otro togado y un secretario: creándose además la plaza de decano, cuyo nombramiento deberia recaer en un general, obligado á asistir contínuamente al Consejo, porque, segun la planta de 1773, era decano, como consejero nato, el secretario del despacho universal de la Guerra.

Esta es la mas notable alteracion que se hizo en la organizacion de 1773, pues por lo demás, se conservó la constitucion esencial, dada por esta, y se declararon de la competencia del Consejo los mismos negocios de que venia conociendo; siendo las otras disposiciones de la nueva Real cédula de índole puramente reglamentaria, con respecto al modo y forma de proceder en los negocios, á la manera de ejercer su tramitacion la superior inspeccion y vigilancia que correspondia al decano, y á dirimir y prevenir cuestiones de antigüedad y precedencia.

Como se vé, era el Supremo Consejo de la Guerra un cuerpo revestido de facultades gubernativas y judiciales, con el cual se consultaban los asuntos de importancia y gravedad, correspondientes al Ministerio de la Guerra, y que conocia en grado de apelacion de los procesos militares, conforme á lo prescrito en las leyes y ordenanzas, y de los negocios contenciosos del fuero de guerra, marina y estranjería. Gozaban los consejeros del Supremo de la Guerra, como iguales á los del de Castilla, sin diferencia alguna, de los mismos honores que estos, y guardaban el órden de precedencia, con sujecion á su antigüedad respectiva, siempre que concurrian á actos, que no eran peculiares de uno ú otro

tribunal, pues en los que lo eran, precedia, aunque fuera mas moderno, el ministro de aquel, en que se trataba el negocio de su esclusiva competencia. Tenian además, tanto los consejeros propietarios, como los honorarios, así en la armada como en el ejército, sin distincion de casos, los honores de mariscal de campo, cuando no les correspondieran mayores á los que fueran militares por su graduacion, y derecho, por tanto, á que se les pusiera guardia fuera de la Córte. (Leyes 1.ª, 3.ª, 7.ª y 10, tít. 5.º, lib. 6.º, Nov. y notas 18 y 19 del mismo título y libro.)

Este Consejo fué suprimido por Real decreto de 24 de Marzo de 1834, creando en su lugar el *Tribunal especial*, luego *Supremo de Guerra y Marina*, al cual pasaron las atribuciones judiciales de aquel; y las gubernativas al Consejo Real de España é Indias, que se erigió por otro decreto de la misma fecha.

Andando el tiempo, y estableciéndose reiteradamente en nuestras constituciones políticas que, en lo sucesivo no habria mas que un solo fuero, se pensó en la unificacion de fueros, y en 1866 se llegó á presentar á las Córtes un proyecto de ley, en virtud del que, simplificado el fuero, y separado lo judicial de lo gubernativo y consultivo, en vez del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, quedaria un Consejo Supremo de la Guerra; y para lo judicial, se establecia en Madrid un Tribunal de alzadas, que se denominaría *Audiencia militar de Madrid*: pero este proyecto, empezado á discutirse, no llegó á ser ley, por cambio de gobierno, continuando, por tanto, el Supremo Tribunal de Guerra y Marina.

Cesó este al fin, por decreto del Gobierno provisional, de 16 de Abril de 1869, creándose en su lugar el actual Consejo Supremo de la Guerra; pero no ya de marina, por cuanto, dado el decreto de 6 de Diciembre del año anterior, de unificacion de fueros, y simplificada así la justicia militar, para la de marina se ha creado el *Tribunal* del Almirantazgo, como todo se espresa en sus artículos respectivos.

El Consejo Supremo de la Guerra se halla dividido en dos salas: una de gobierno, para el exámen de los asuntos propios de su conocimiento, como son los relativos á retiros de jefes, oficiales y tropa, personal del cuerpo jurídico militar, secretaría de su junta inspectora, Ordenes de San Hermenegildo, San Fernando y demás cruces militares, en general; justicia, casamientos, monte-pío, premios de constancia, quintas, vicariato, y á todos aquellos puntos interesantes del servicio, en que el Gobierno estimase oportuno oir su dictámen; conservando, á la vez, el Consejo las facultades jurisdiccionales de que se hallaba revestido el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en los asuntos criminales del fuero militar, menos en los casos declarados posteriormente de desafuero: y la otra de justicia. Por manera que, el mencionado decreto crea un Consejo Supremo de la Guerra con la misma competencia y atribuciones que el tribunal á que sustituye, salvas las modificaciones introducidas en ellas por los decretos del Gobierno provisional de 6 y 31 de Diciembre.

El presidente debe ser un capitan ó teniente general de ejército, y para suplirle, debe haber un vice-presidente de esta última clase. La sala de gobierno se compone de dos consejeros, tenientes generales de ejército, de tres mariscales de campo, un intendente de ejército, de un asesor letrado, y del fiscal militar, de la clase de brigadier. La de justicia la forman tres ministros y un fiscal togado, y los suplentes que el servicio demande; debiendo ser desempeñada la secretaría por un brigadier de ejército.

CONSEJO DE HACIENDA. Los Reyes Católicos, por sus ordenanzas de Madrigal, de 1476, crearon las dos *Contadurías Mayores*. No se puede precisar con seguridad la forma que, antes de aquella importante medida, tenia el gobierno superior de la Hacienda de Castilla; pero debe suponerse que se habia dado ya algun paso para fundar la administracion y la contabilidad de las rentas reales, haciendo que dejasen de ser solamente una seccion de las atribuciones de la Mayordomía Mayor del Rey. Pero, desde 1476 hasta nuestros dias, se tienen datos seguros y abundantes para escribir la historia

de las dos Contadurías mayores, y del Consejo de Hacienda, en que una de ellas se convirtió en el siguiente siglo.

Las Contadurías, creadas por las citadas ordenanzas de Madrigal, se llamaban de *Hacienda* y de *Cuentas*: la primera tenia por objeto la recaudacion y la distribucion de los fondos; la segunda la contabilidad. Los contadores mayores se hallaban autorizados para nombrar tenientes, asesor, escribano mayor de rentas, escribanos de contadores, relator y oficiales contadores de libros. Para cada libro, así de *cargo*, como de *data*, se señalaron dos contadores: tres eran los libros de data, y se llamaban, de rentas, relaciones y estraordinarios; y cinco los de cargo, con los nombres de sueldos, tierras, acotamientos, mercedes y quitaciones.

Pareció algun tiempo despues que la gravedad ó la índole de algunos asuntos, de los sometidos á las contadurías mayores, exigian mayor autoridad ó ilustracion, en quienes los juzgasen; y Cárlos I, en las Córtes de Toledo de 1525, mandó que se nombrasen dos ministros del Consejo Real, ó de Castilla, para que concurriesen con los contadores y su asesor á determinar en grado de revista, sobre los asuntos de justicia, cuando fuesen árduos y graves. El mismo Monarca dispuso en Bruselas, en 1549, que todos los jueves, por la tarde, se reuniesen los dos consejeros de Castilla (siguiendo el método prescrito ya para el Consejo de las Ordenes) con los contadores y asesores, á fin de ver los pleitos graves, y los en que hubiese discordia, recusacion ó interés de alguno de los jueces.

Habiéndose atribuido, en 1553, á poco celo de las contadurías el mal estado de la recaudacion de las rentas, se dió comision al doctor Velasco, para que las visitara; y de la visita fueron resultado las ordenanzas decretadas en la Coruña en 1554, por el Príncipe Don Felipe, que gobernaba en nombre de su padre. Se quitó entonces á los contadores mayores la facultad de nombrar sus tenientes, y se dispuso que estos se llamaran *contadores de S. M.* En vez de los dos asesores, se crearon tres plazas de letrados, con nombre de *oidores de la Contaduría mayor de Hacienda*, y con la misma jurisdiccion, autoridad y preeminencias que los de las Audiencias. Se ordenó además que los contadores no tuvieran voto en los negocios de justicia: que los demás despachasen juntos, á reserva de las revistas en los casps árduos, á que habian de asistir, además, los dos consejeros de Castilla: que en atencion á que la mayor parte de los negocios, tratados en la Contaduría mayor de Hacienda, interesaban al patrimonio Real, residiese constantemente en dicha Contaduría uno de los dos fiscales del Consejo Real, de modo que no se ocupara en ninguna otra cosa, salvo cuando pareciese necesario que informase en union con el otro fiscal; y que de las sentencias y autos dictados por los dichos oidores de la Contaduría mayor, no hubiera apelacion ni otro recurso alguno, sino el de súplica ante ellos mismos, segun se observaba con los oidores de las Reales Audiencias, escepto los casos en que, por capítulos de córtes, ó por cédulas, se hubiese determinado que debian juntarse en grado de revista con los consejeros, nombrados al efecto en cada año. (Ley 1.ª, tít. 10, lib. 6, Nov.)

Al morir, en 1557, D. Francisco de los Cobos, que era único contador mayor, en su reemplazo fueron nombrados tres, de los que dos fallecieron en breve tiempo, volviendo á quedar uno solo, que fué D. Ruiz Gomez de Silva; pero habiéndose dicho por equivocacion, al espedirse en Bruselas los títulos de estos tres contadores mayores, que tendrian iguales votos que los oidores, de lo que hubiera resultado que determinaran en asuntos de justicia sin ser letrados, fué preciso subsanar el error por las ordenanzas de 1568 y 1569 (ley 2.ª, tít. 10, lib. 6.º, Nov.). Por este tiempo era ya costumbre llamar Consejo de Hacienda, aun en los documentos oficiales, á la Contaduría mayor del mismo nombre, aunque todavía no se lo habia dado como propio ninguna ley.

Diéronselo las ordenanzas del Pardo, espedidas por Felipe II, en 1593, de resultas de la visita encargada al licenciado Chumacero, empezada en efecto por éste, y concluida por el licenciado Laguna; pero conservándose al mismo tiempo, por separado, las dos contadurías mayores y el tribunal de oidores. El

Consejo de Hacienda habia de constar de un presidente, dos ministros del Consejo Real, y dos contadores de los cuatro que debia haber, un fiscal y un secretario. La Contaduría mayor de Hacienda, de los cuatro contadores, llamados de Hacienda y de las órdenes; dos de la razon y uno de la caja. El tribunal de oidores, de cuatro letrados, un fiscal y uno de los contadores, nombrado por el presidente; pero sin que este último tuviera voto. Y por último, la Contaduría mayor de Cuentas, de cuatro contadores de cuentas, y fiscal de capa y espada. Habia además oficiales contadores de Hacienda, oficiales contadores de cuentas, relatores, escribientes, porteros y un solicitador fiscal de cuentas.

Dispuso Felipe II que al Consejo, y no á otro tribunal alguno, correspondia: 1.°, administrar *por mayor* la Real Hacienda, dando las formas y órdenes que hubieran de observarse en su administracion; entender en todo lo que tocare á su acrecentamiento y buen gobierno; hacer todas las provisiones de dinero, que fuesen necesarias, escusando, en lo posible, los asientos, como cosa dañosa: 2.°, enviar comisarios, aunque solo en caso preciso, y entonces nombrados por todos los miembros del Consejo: 3.°, tratar y concluir todas las ventas de alcabalas y tercias, oficios, tierras y exenciones de lugares y demás cosas *que se acostumbraban vender*: lo que debia tambien escusarse, en cuanto se pudiera y las necesidades lo sufrieren, procurando por todos los medios componer la Real Hacienda, sin recurrir á tales ventas: 4.°, conocer de las dudas que resultaren de asientos, ventas y arbitrios que no llegaren á ser pleito, ni hubieren de verse en forma de juicio, porque entonces se deberian remitir á los oidores de la Contaduría: 5.°, tratar todas las materias de arbitrios y espedientes para hacer y acrecentar la Hacienda, así los que se trataban entonces por varias juntas, como los que se ofrecieren en adelante; pero sin que se pasara á ejecutar ningun acuerdo, hasta despues de haberlo consultado con S. M. y de obtener su aprobacion, para que lo pudiera suspender, por temor de inconveniente ó injusticia, ó lo mandare ver por más personas de letras y conciencia, de la misma manera que se reservaba el Rey agregar tambien al Consejo otros sujetos, para tratar de los asientos y arrendamientos cuantiosos, cuando le pareciere convenir para mayor seguridad del acierto: 6.°, espedir las correspondientes cédulas en el Real nombre, para todo lo que se hubiere de librar, dar y pagar de la Real Hacienda, por cualquier concepto, escepto en los casos y cosas que habia costumbre de librar en Consejo de Cámara, que eran las cédulas de merced de juros y de maravedís, por una vez, salarios de tenencias, escribanías de rentas y otros.

Se prohibió al Consejo: 1.°, mudar las situaciones de juros, ni deudas; hacer descuentos, igualas, composiciones ni esperas en cantidades, debidas por arrendadores ú otras personas, sin consultarlo con S. M. y tener órden suya: 2.°, tratar pleitos de justicia entre partes, los que debia remitir á la Contaduría mayor de Hacienda, empezando por enviarle los que á la sazon tuviere. Y se dispuso que los contadores no fallaran ni juzgaran los pleitos y negocios de justicia, ni tuvieran voto en ellos, porque solo los oidores de la Contaduría mayor debian conocer *privative* de toda cuestion entre partes, sobre rentas reales, pechos y derechos, que se debieran á la Real Hacienda, y sobre exenciones de alcabalas y tercias y demás impuestos, como no se pretendieran por razon de hidalguía, ó no fueran *casos de Córte*.

Una nueva ordenanza ó planta, de 16 de Octubre de 1602 (ley 4.°, tít. 10, lib. 6.°, Nov.), mandó que el Consejo y la Contaduría mayor de Hacienda se reuniesen en un solo tribunal, que se llamase *Consejo de Hacienda y Contaduría mayor de ella*, en vista de haber demostrado la esperiencia los muchos inconvenientes, que de su division resultaban, y la imposibilidad de aplicar la doctrina de que en uno se tratase de la Real Hacienda por mayor, y en la otra por menor: que cuando el presidente fuese letrado, tuviera voto en todos los tribunales, declarase lo que se habia de tener por pleito, para remitirlo, en su caso, al de los oidores, y decidiese las diferencias entre dichos tribunales y ministros: que se aumentara un oidor, pa-

ra que, siendo cinco, se escusasen remisiones en discordias: que pudieran ser jueces en remision los oidores que no se hubieren hallado presentes á la vista, para escusar que entrasen los del Consejo Real: que un consejero, ú oidor, fuese visitador del Consejo, sus oficiales y oficinas: que no hubiere grado de *Mil y Quinientas*; y que en la Contaduría mayor de cuentas hubiere 24 contadores de resultas y seis entretenidos sin sueldo. En virtud de esta planta quedaron: el Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, con un presidente, ocho contadores consejeros, dos ministros del Consejo Real ó de Castilla, un fiscal y dos secretarios: el tribunal de oidores, con cinco de estos, los dos consejeros de Castilla los jueves por la tarde, y fiscal: el tribunal de cuentas, con cuatro contadores y fiscal: oficiales contadores, escribano mayor de rentas, dos tesoreros generales, veinticuatro contadores de cuentas, diez y seis entretenidos, cuatro ordenanzas y otros subalternos. Por separado, habia la sala de comision de millones, contribucion de que, como arbitrio, conocia el Consejo de Castilla, y cuya administracion corria por cuenta del Reino.

De resultas de una visita encomendada al licenciado Melchor de Molina, Felipe III espidió Real cédula de reformacion del Consejo y tribunales, en 12 de Noviembre de 1621, suprimiendo cuatro de los ocho contadores consejeros, uno de los cuatro contadores del tribunal de cuentas, uno de los dos secretarios, el contador de la caja, los contadores de rentas (agregándose los libros de quitaciones á los del sueldo, y los de lo salvado á los de mercedes), los contadores de penas de cámara (agregándose sus libros á los de la razon, como habian estado antes): el de la intervencion de la receptoria del Consejo, los del medio general del año 1608; uno de los dos tesoreros, y los cuatro ordenadores de cuentas, ocho contadores de resultas y libros, reduciendo éstos á veinte; uno de los trece entretenidos con título, reduciéndolos á doce; y los sesenta y cuatro entretenidos por nombramiento del presidente, de los que solo debian quedar ocho con salario, para las faltas y ausencias de los otros.

Por estas reducciones se vé cuánto se habia aumentado el número de empleados fuera de la planta, por disposiciones particulares. A los entretenidos se volvieron á aumentar otros ocho en 1628, y despues cuatro mesas para cuentas atrasadas, y se separó una para las de Flandes. Se mandó además que el consejero ó contador de cuentas que se hallase presente á la vista de algun pleito, asistiera tambien al tiempo de votarle, para informar de hecho á los oidores.

En 1635 se hizo otra reforma, de que quedan escasas noticias; y otra en 1638, reduciendo el número de consejeros á seis, el de contadores de cuentas á tres, el de contadores de resultas á veinticuatro, el de entretenidos, con título Real, á diez y seis y el de los nombrados por el presidente á diez y seis tambien.

Desde 1515 los procuradores á Córtes intervenian en la cobranza de los servicios ordinario y estraordinario; y habiendo tomado el Reino á su cargo todas las alcabalas y tercias de Castilla, pidió y obtuvo en las Córtes de Valladolid de 1548, «que para la espedicion y ejecucion de lo otorgado á S. M., residiesen en la córte dos de los procuradores de Córtes por el tiempo que fuera necesario, los cuales asimismo entendieran libremente en administrar y beneficiar lo tocante al encabezamiento general; y que los contadores mayores no les impidiesen en la ejecucion de sus oficios.» Estos procuradores se aumentaron luego á tres, y tomaron el nombre de diputados de los Reinos. Celebraban sus juntas dos veces por semana, en una sala del convento de San Martin, y despues en la sala de Córtes del Palacio Real; daban cuentas al Reino, cuando se reunia en Córtes, y tenian á sus órdenes secretarios-contadores del reino, agente y procurador, abogados, porteros, capellan, médicos y cirujanos.

Cuando en 1590 fué concedido el primero de los servicios, que se llamaron *de Millones*, se puso como condicion por las Córtes, que su cobranza y administracion corriera á cargo de sus procuradores. El Consejo de Castilla, sin embargo, pretendia ser de su competencia todo lo que se refiriese á la imposicion de ar-

bitrios, justicia en la cantidad, igualdad en la exaccion y cobro de los primeros contribuyentes, así como el Consejo de Hacienda intervenia en la administracion de las rentas, despues que su producto entraba en manos de los receptores.

Al votarse el segundo servicio de Millones, en 1597, se estipuló que solo el Reino entendiese en lo relativo á él; y en la escritura, espedida en 1601 para el tercero, que se habia concedido en 1600, se ordenó: «que la administracion de este servicio ha de estar meramente á disposicion del Reino, para nombrar los administradores y ministros que le parecieren al Reino y á las ciudades y villas de voto en Córtes, á quien se da por esta condicion la receptoría de este servicio, para que ellas cobren y paguen. Los dichos ministros, que así se nombraren por el Reino ó ciudades ó villas, podian compeler, como jueces ejecutores, á las personas que hubieren de acudir con lo que fuere procediendo de dichos servicios, con inhibicion de otros cualesquiera tribunales y jueces; y en lo que toca á cobrar dicho servicio á sus plazos, haya de ser por los Ministros de S. M. en la forma y manera que cobra los otros servicios ordinario y extraordinario.» La jurisdiccion habia de ser ejercida por un tribunal, compuesto de la justicia ordinaria y dos comisarios regidores de cada ciudad, así en lo civil, como en lo criminal, para castigo de los fraudes, con apelacion al Consejo Real.

En las condiciones para el 4.° servicio de Millones, en 1608, se dejó á la eleccion de los interesados que apelasen de las decisiones de los juzgados inferiores á los de las ciudades de voto en Córtes, ó al Consejo Real; se concedió para todas las causas de 20,000 maravedís, ó menos, grado de revista en las ciudades ó villas, ó apelacion á las de voto en Córtes, tambien á eleccion; y que de toda determinacion de cualquier ciudad se pudiese apelar al Reino, ó á quien él dejare señalado, no quedando recurso contra lo que determinare, sino ante el Consejo Real. Y en cuanto á la jurisdiccion de Hacienda, se estipuló que el Consejo de Hacienda no habia de despachar ejecutores, para que tomasen cuentas á los receptores de las ciudades de voto en Córtes, ni llamarlos á darlas; sino en caso de ser pasado el plazo, y entonces se habia de hacer saber al Reino, para que proveyese en ello: y si todavía no pagasen, podria el Consejo despachar los ejecutores, á costa de los mismos receptores, y no del Reino.

El 4.° servicio de Millones se otorgó en 1608, y por primera vez se nombraron, en número de cuatro, comisarios del Reino para la administracion de este impuesto. El 5.° fué votado en 1611, y entonces se pactó que las apelaciones de las causas de Millones pudiesen ir, á eleccion de los apelantes, al Reino y sus comisarios, ó al Consejo Real, sometiéndose el Reino á este Consejo y al de Hacienda, *en lo que le tocaba y no en mas.*

En 1631 fueron sustituidos los Millones con un impuesto sobre la sal, y se creó un *Consejo de la sal*, compuesto de ocho consejeros de Castilla, cada uno de los cuales habia de tener la superintendencia de una provincia y proceder con inhibicion de todos los tribunales, juntas y consejos, incluso el de Hacienda. Pero en seguida se volvió al servicio de los Millones, y por la escritura de 13 de Julio de 1632 se repitieron las condiciones de las anteriores, ampliándolas y disponiendo que la administracion y distribucion dependiese solamente del Reino, sin haber apelacion para el Consejo Real, ni otro alguno, escepto que los apelantes pudieran elegir entre acudir á la Comision de los Millones ó á la Sala de Mil y Quinientas, en cuanto al cumplimiento de los contratos: que el Reino nombrase siempre, antes de separarse, los cuatro comisarios; que S. M. eligiera por su parte, para que asistieran á la comision, tres señores consejeros, uno del de la Cámara, otro de la Sala de Mil y Quinientas, y otro del de Hacienda, teniendo todos iguales votos; que en junta de todos ellos, y ante los escribanos mayores de las Córtes, que eran secretarios de ellas, se determinasen, en primera y segunda instancia, todas las causas de justicia, y de gobierno y gracia, á pluralidad de votos; y que no se reuniese esta comision con la diputacion del Reino para alcabalas, pero que se le agregara un fiscal le-

trado, sin voto, y fuese tambien parte el agente y procurador del Reino.

Por Real decreto de 4 de Marzo de 1647 fué incorporada al Consejo de Hacienda la Comision de Millones; pero habiendo representado el Reino que sin su consentimiento no habia podido el Rey tomar tal providencia, y despues de pedir y obtener que se le oyera en justicia, fué el Rey vencido en vista y en revista, y volvieron las cosas á su anterior estado. Mas en las ordenanzas, hechas por S. M. para la comision, en 11 de Enero de 1657, atendiendo al mucho coste que la division de atribuciones producia, mandó el Rey al Reino que prestase su consentimiento, que fué prestado en efecto en 27 de Marzo de 1658, con la condicion de que S. M. mantuviese la Comision de Millones en el mismo grado de autoridad. En su consecuencia, por Real resolucion de 30 de Mayo del mismo año, se dispuso que cesaran los ministros de los Consejos Real y de Hacienda que habian asistido á la comision, y que los comisarios pasasen, con fiscal, secretarios, y demás oficiales, al Consejo de Hacienda, en el que habian de formar, agregándoseles además tres consejeros, una Sala de Millones, con igual autoridad que las demás (ley 5.ª, tít. 10, libro 6.º, Nov.).

En 17 de Julio de 1691 se dispuso que, por hallarse sobrecargadas las salas del Consejo de ministros supernumerarios, se redujeran al número preciso de las reformas anteriores, quedando: en el Consejo, el presidente ó gobernador, el gran canciller, seis consejeros, un fiscal y dos secretarios: en la sala de justicia, cinco oidores; en la Contaduría mayor de Cuentas, un consejero, un fiscal, y cuatro contadores de número; en la sala de los Millones, tres ministros del Consejo, cuatro procuradores de Córtes, y los seis togados, que asistian por la tarde: habiendo además las contadurías de libros, contadurías de Millones, relatores, agentes fiscales, escribanos de Cámara, capellan, alguacil de córte, y otros subalternos.

La creacion de superintendentes de Hacienda en las 21 provincias de Castilla, en 2 de Setiembre de 1691, mermó algo las facultades del Consejo; que, en cambio, se acrecentaron con suprimirse, en 18 de Junio de 1694, la diputacion de alcabalas, y mandarse que la representacion de los Reinos se mantuviese con todos sus honores y preeminencias en los cuatro procuradores de la sala de Millones.

Otra vez, por la razon de haber vuelto á haber muchos ministros supernumerarios, nombrados fuera de planta, se decretó otra nueva en 23 de Febrero de 1701, que redujo el Consejo al presidente ó gobernador, el gran canciller, y ocho consejeros de capa y espada; la sala de justicia á cinco oidores; y la contaduría de cuentas á un consejero y cuatro contadores mayores de número. Los reinos de Aragon y Valencia obtuvieron en 1712 la creacion de una quinta plaza de comisario de Millones, al sorteo de la cual debian concurrir sus diez y seis ciudades de voto en Córtes.

La que fué conocida por el nombre de planta de Macanaz, se decretó en 10 de Noviembre de 1713. Atribuyendo el atraso que se notaba en el despacho de los negocios al corto número de ministros, asignó al Consejo de Hacienda el personal siguiente: el veedor general, funcionario que era entonces de reciente creacion, cinco presidentes, diez y ocho consejeros togados, diez y ocho de capa y espada, dos fiscales generales togados, cuatro abogados generales togados, cinco secretarios en jefe, doce relatores de cuentas, y cuatro sustitutos de los dos fiscales. El Consejo quedó dividido en sala de gobierno, sala de justicia, sala de Millones, sala criminal, y contaduría mayor de cuentas; y por separado, habia una junta compuesta de tres consejeros de Indias, y tres de Hacienda, el fiscal de Indias, uno de los de Hacienda, y un secretario esclusivamente destinado á la misma junta, que debia ser siempre presidida por uno de los presidentes de Hacienda. La comision de Millones representó que por esta planta quedaba privada de la jurisdiccion criminal y de la igualdad de votos, que debia haber entre los ministros de S. M., y los procuradores de Córtes; y S. M., en 29 de Enero de 1714, declaró que, enterado de la ins-

tancia del Reino, y de que en la sala de Millones habia materias de gobierno y de justicia, disponia que dicha sala se dividiera en dos, una de gobierno, á que concurriesen un presidente y cinco consejeros de hacienda con los cinco procuradores de Córtes; y otra de justicia, compuesta de un presidente togado, y seis consejeros togados, en union tambien con los procuradores; y que en las dos se determináran todos los negocios de Millones, así gubernativos, como civiles y criminales, no obstante haber en el Consejo salas de gobierno y de justicia civil y criminal.

La planta de Macanaz fué derogada en 9 de Noviembre de 1715 por otra nueva, que redujo á una las dos salas de Millones, y arregló así el Consejo: una sala de gobierno, con el presidente ó gobernador, el gran canciller, nueve ministros de capa y espada, un fiscal, dos secretarios, y los dos asociados del Consejo de Castilla; una de justicia, con el presidente ó gobernador, cinco togados y un fiscal; una de Millones, con los cinco diputados del reino, cinco ministros de capa y espada, tomados de los nueve de la sala de gobierno, un fiscal y un secretario; y la contaduría mayor de cuentas, con cinco ministros y un fiscal.

En 3 de Julio de 1718, todas las salas quedaron reducidas á una, con un gobernador, seis ministros de capa y espada, seis togados, dos fiscales, un secretario, y contadores generales y subalternos, suprimiéndose los dos asociados del Consejo de Castilla, y agregándose la secretaría y contaduría de Millones á la de Hacienda.

En 18 de Marzo de 1720 se volvió á dividir el Consejo en salas de gobierno, justicia, Millones y Tribunal de Cuentas. Con tres ministros togados de la sala de justicia, y el de capa y espada de la misma, se organizó por separado, en 10 de Enero de 1728, una *junta de quiebras*, en atencion á que varios decretos, espedidos con anterioridad, se habian propuesto, sin éxito, acelerar la cobranza de las deudas atrasadas. Una nueva planta, dada en 1739, se dirigió principalmente á resolver dudas acerca de facultades de los consejeros togados y los de capa y espada, y resolvió, que los primeros no asistiesen mas que á la sala de justicia; pero esta reclamó contra la innovacion, y obtuvo que en 1740 fuesen restablecidas las plantas de 1718 y 1720. De resultas de este restablecimiento, la sala de Millones pretendió que le correspondia mezclarse en los negocios de Aragon, siendo su pretension denegada en 16 de Enero de 1731. En 22 de Febrero de 1743, se aumentó el número de consejeros de capa y espada, se disminuyó el de los togados al de la planta de 1720, y se concedió el voto de consejeros á los tres contadores generales de Valores, Distribucion y Millones. Una de las tres fiscalías, que entonces resultaban, fué suprimida en 1.° de Marzo de 1752, y en 23 de Abril del mismo año se mandó que para el Consejo quedara solo el de justicia, y que el de Millones no saliese de lo que le correspondia.

Habiendo dado Cárlos III en 1760 nuevas facultades al superintendente general, quien tenia jurisdiccion, aunque de sus providencias se admitia apelacion para la sala de justicia del Consejo, resultaba escesivo el número de consejeros; y en 6 de Mayo de 1761 se estableció una nueva planta, no dejando mas que ocho de los quince que entonces habia de capa y espada; reduciendo los ministros del Tribunal de Cuentas á los cinco de la planta de 1715; conservando los siete consejeros togados, uno en la sala de gobierno, otro en la de Millones y los ya dichos en la de justicia; dejando los tres contadores generales, y disminuyendo á 30 los oficiales contadores.

La ley 12, tít. 10, lib. 6, Nov. (23 de Marzo de 1763) deslindó las atribuciones entre el Consejo de Hacienda y la Cámara de Castilla, declarando que correspondia al primero el conocimiento de los asuntos de ventas de alcabalas, tercias y demás rentas de la Corona; de todo género de jurisdiccion realenga, concedida á particulares; de oficios, tierras, montes, árboles y cortijos, en que la Corona otorgase algun aprovechamiento; de acotamiento de tierras con jurisdiccion; de férias y mercados con franqueza ó minoracion de tributos, y de cualquiera derecho ó alhaja que se

derivase del Real patrimonio; y á la Cámara el de las exenciones ó privilegios de villazgos, los acotamientos de tierras sin jurisdiccion, y las dispensaciones de ley y demás gracias al sacar, que no se derivaran del Real patrimonio.

Reñida competencia surgió en 1764 entre la sala de justicia y la de Millones, con motivo de cierta apelacion contra el superintendente general, sobre escesos de venta de aguardiente. La de justicia, fundándose en que se habia dado nueva forma al régimen de las rentas, sustituyéndose los administradores por cuenta directa del Estado á los asentistas, pretendia que solo á ella tocaba resolver: la de Millones, quejándose de que los administradores se atrevian á mas que los arrendatarios, recordaba los pactos que, en forma de escritura, mediaban entre el Rey y el Reino: replicaba la de justicia que la cuestion concreta que daba orígen á la competencia, importaba poco en sí misma, puesto que de todas maneras habia de ser resuelta por los consejeros togados, bien formando solos aquella sala, ó bien asistiendo á la de Millones; pero que el empeño manifestado por esta no permitia mirar la cosa como de poca entidad, y dejaba ver estar comprometida la soberanía del Rey, que no debia dejarla menoscabar por las escrituras alegadas. El Rey resolvió que se observaran los reales decretos de 1742 y 1749, y se hiciera todo como lo entendia la sala de justicia.

Con motivo del establecimiento, en 4 de Julio de 1770, de la *única contribucion*, se encomendó la ejecucion de todo lo necesario para llevar adelante aquella importante reforma, al Consejo de Hacienda, en una sala especial, que debia formarse sobre la base de la de Millones, con el nombre de *Sala de la única contribucion*, componiéndose del gobernador y nueve consejeros, tres de ellos togados, cuatro de capa y espada, y dos eclesiásticos; además de un fiscal, un secretario, y los seis diputados de Millones, con voto éstos, en los negocios de los pueblos de la provincia que respectivamente representasen. La diputacion de Millones reclamó que se le conservare voto indiviso en las materias del nuevo impuesto, como lo habia tenido en el que le habia dado nombre, y no ceñido á los negocios de los pueblos de la respectiva provincia, y así se le concedió por Real decreto de 3 de Octubre de 1770.

Nuevas competencias sobrevinieron entre el Consejo de Hacienda y la Cámara de Castilla, con motivo de los negocios del derecho de amortizacion de los reinos de Valencia y Mallorca; y por Real resolucion de 4 de Abril de 1772 se fijaron los límites, determinando que las peticiones de licencias fuesen remitidas por el Ministerio de Hacienda á la Cámara, que por ésta se concediesen, y que despues de la concesion, volviese á Hacienda el conocimiento del asunto.

Con la jurisdiccion de Marina se hizo otro deslinde en 1777, mandándose que no se cumpliera en los arsenales ninguna sentencia del Consejo de Hacienda, sin la aprobacion de S. M.

Con el Consejo de Castilla se suscitaron nuevas cuestiones de competencia, sobre el conocimiento de los pleitos de tanteo de las cosas enajenadas por el Gobierno; y en Real cédula de 10 de Marzo de 1778 se determinó que por el Consejo Real ó de Castilla se vieran y fallaran las cuestiones litigiosas sobre tanteo de jurisdicciones, oficios, derechos jurisdiccionales y arbitrios que se hubiesen vendido; y por el de Hacienda los que se dirigieren á cobrar de los compradores el precio pactado por la venta, y los de reincorporacion á la Corona, mediante tanteo y devolucion de dicho precio.

Respecto de las causas de utensilios, hubo dudas de competencia con el Consejo de la Guerra, y por Real resolucion, comunicada al de Hacienda en 12 de Marzo de 1778, se declaró que á este correspondia todo lo relativo á la cobranza, y al de Guerra los casos contenciosos que ocurriesen en su provision.

Por Real decreto de 2 de Febrero de 1803 se dió nueva planta al Consejo de Hacienda, para restablecerle en su autoridad, lustre y facultades, uniformar el sueldo y carácter de sus ministros, fijar su número y concederle el conocimiento de varios negocios, mandándose con estos propósitos que hubiera en él

un gobernador y once ministros de capa y espada, como se habia dispuesto en la planta anterior de 1761, y como con repeticion estaba encargado, incluyéndose en esas plazas las de los tres contadores generales; pero no la del tesorero general, porque, no pudiendo asistir de contínuo, tampoco debia considerársele como ministro de la dotacion permanente de ninguna sala del Consejo, al que además habian de pertenecer diez togados, tres fiscales y dos secretarios, distribuidos, con los anteriormente dichos, en sala de gobierno, sala de Millones, primera y segunda de justicia, y tribunal de la Contaduría mayor de Cuentas. Se concedió al mismo tiempo al Consejo el título de supremo, y á sus ministros la igualdad de sueldos y honores con los de Castilla é Indias.

La Constitucion política de la monarquía, promulgada en 19 de Marzo de 1812, separó lo judicial del conocimiento de los consejos, y refundió todos estos para lo gubernativo en el que estableció con el título de Consejo de Estado, mandando que fuese el único del Rey (art. 236). Suprimido entonces, en su consecuencia, el de Hacienda, restablecido en 11 de Agosto de 1814, vuelto á suprimir en 1820, y á restablecer en 19 de Agosto de 1823, fué por último definitivamente disuelto por Real decreto de 24 de Marzo de 1834, que en su lugar creó un Tribunal Supremo de Hacienda.

CONSEJO DE INDIAS. Fué supremo, como el de Castilla y demás de dicha clase.

Segun Zamora, este Consejo fué creado por Cárlos V, en 1524. Parece fundarse en que una cédula circular, remitida á Indias, en 21 de Setiembre de 1810, anunció á las autoridades de aquellos Reinos y provincias el restablecimiento en Cádiz de su «Consejo Supremo, creado desde el año de 1524.» Las *Décadas abreviadas de los descubrimientos, conquistas, fundaciones y otras cosas notables* de las Indias occidentales, publicadas en el tomo VIII de la coleccion de documentos inéditos, dicen tambien que el Supremo Consejo de Indias fué instituido en 1524.

Pero hay datos muy atendibles, de que su antigüedad es mayor. Bernal Diaz del Castillo (cap. 135, de su *Conquista de Nueva España*), refiere que, al hacerse en 1520 ciertos repartos de indios entre los soldados de Hernan-Cortés, hubo quejas y muchos amenazaban con que lo harian saber en Castilla al Rey y á los de su Real Consejo de Indias. D. Pascual Gayangos, en las notas á su edicion de las *Cartas y relaciones de Hernan-Cortés*, refiere (pág. xvii de la Introduccion), que ha tenido á la vista una provision original del Consejo de Indias, de fecha de 15 de Febrero de 1521. Robertson (*Historia de América*), dice que el Consejo de Indias fué establecido por Fernando V, en 1511, y recibió de Cárlos V, en 1524, una forma mas perfecta. Nuñez de Castro (en *Solo Madrid es Córte*), habia afirmado ambos hechos casi con las mismas palabras. Antonio de Herrera (*Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y tierra firme del mar Océano*), al hablar de la llegada de Pedro de Arbolancha, enviado por Vasco Nuñez de Balboa en 1514, para anunciar el descubrimiento del mar del Sur, se espresa así: «Recibiéronle con gran gozo Juan Rodriguez de Fonseca, que ya era obispo de Búrgos, y el señor comendador Lopez de Conchillos, en quien se resumia todo el Consejo y gobernacion de las Indias, por que no habia aun entonces Consejo particular de ellas; sino que, para las cosas árduas se llamaba al doctor Zapata, al doctor Palacios Rubios, al licenciado Santiago y al licenciado Sosa, todos del Consejo Real, con los cuales el obispo de Búrgos comunicaba lo que se habia de hacer.»

Francisco Lopez de Gomara completa estas noticias diciendo: «Luego que se hallaron las Indias y que comenzaron á descubrir tierra firme, se conoció ser grandísimo negocio, aunque no cuanto agora es, y procuraron los Reyes, de gran memoria, D. Fernando y Doña Isabel, que eran sábios en la gobernacion, de conceder los pleitos y negocios de aquellas nuevas tierras á personas de confianza, que despachasen con brevedad lo que ocurriese. Mas no hicieron chancillería de ello en forma, por sí. El que lo gobernaba todo era

Juan Rodriguez de Fonseca, que comenzó á entender en ello, siendo dean de Sevilla y acabó obispo de Búrgos, y aun acabára arzobispo de Toledo, si no fuera escaso: Fernando de Vega, señor de Grajales y comendador mayor de Castilla, que trataba todos los negocios del Reino, entendió mucho tiempo en las cosas de Indias, y aun Mercurino Gatinara, gran canciller, entendió tambien en ellas; y Mr. de Lassao, que era de la Cámara del Emperador, y el licenciado Pedro de Vargas, tesorero general de Castilla, y otros grandes letrados. Mas como no habia personas ciertas, sino que se nombraban los que el Rey ó sus gobernadores querian, y era necesario estar estantes á tanta negociacion y tan importante, ordenó el Emperador D. Cárlos, Nuestro Señor, el año de 24, un Consejo Real de Indias, que despachase las causas, mercedes y todas las otras cosas de aquellas partes por sello y registro, conforme al estilo de los otros Consejos de Castilla.»

Solorzano, en su *Política indiana*, sigue la version de Herrera, añadiendo que la institucion del Consejo se hizo en 1.° de Agosto de dicho año 1524; no dando mayores noticias en el discurso especial, que en 1629 escribió, respecto de derechos de preferencia entre los Consejos de Indias y de Flandes, á pesar de lo mucho que importaba en esta ocasion fijar con toda exactitud la antigüedad del primero, del cual el autor era fiscal.

D. Melchor de Macanáz, en manuscritos que conserva su descendiente D. Joaquin Maldonado Macanáz, nos dá la noticia de que Cárlos II, poco antes de su muerte, suprimió la Cámara de Indias, que habia sido formada en el seno del Consejo, á imitacion de la que existia en el de Castilla. Esta Cámara habia sido creada el año 1600, segun un manuscrito de la Biblioteca nacional, señalado con la letra y número Y, 62.

Los honores y preeminencias del Consejo de Indias fueron siempre muy grandes. «Este Consejo, dice otro manuscrito de la misma Biblioteca (Q. 104), es igual al de Castilla en la superioridad y supremo poder, conforme á la institucion y ordenanzas que tiene; y aun mas estraordinaria, pues tiene mucho que falta al de Castilla, porque se junta provision en él de Iglesias, Estado, Guerra, Justicia, Cámara, Hacienda, Gobernacion, Armada y provision de ellas.»

Rigióse el Consejo principalmente, hasta sus últimos tiempos, por las Ordenanzas, que Felipe II y Felipe IV le dieron en 1571 y 1636. Segun ellas debia residir en la Córte y componerse de un presidente, el gran canciller de las Indias; un número determinado de consejeros, que varió, segun las circunstancias, habiéndolo fijado las leyes recopiladas en ocho; un teniente de gran canciller; un fiscal y dos secretarios. Tenia para su servicio tres relatores y un escribano de Cámamara de justicia; cuatro contadores; un tesorero general; dos solicitadores fiscales; un coronista mayor y cosmógrafo; un catedrático de matemáticas; un tasador de costas; un abogado y un procurador de pobres; un capellan que decia misa al Consejo todos los dias que se reunia; cuatro porteros, y un alguacil.

Se estendia la jurisdiccion del Consejo á todas las Indias, teniéndola completa, así para la gobernacion, como para la administracion de justicia; estando prohibido á todos los demás Consejos y tribunales, Chancillerías y Audiencias, entremeterse á conocer en los asuntos de Indias, y siendo obligacion de los escribanos de los otros consejos acudir á este, siempre que los mandare llamar para darle cuenta de cualesquiera negocio ó pleito, que ante ellos se estuvieren siguiendo. Habiendo sido decretada por el Consejo de Indias la prision del licenciado Montaño, oidor de la Real Audiencia de Santa Fé, en Nueva Granada, á quien tenia condenado á muerte, el vicario de Madrid amparó al criminal y despachó letras, declinando la jurisdiccion del Consejo; pero Felipe II, por cédula de 14 de Julio de 1561, decidió la competencia á favor del Consejo de Indias, declarando que le correspondia espedir todas las cédulas, provisiones, autos y mandamientos, para que los jueces eclesiásticos no volvieran á exigirle la inhibicion. Ofrecióse en 1636 nueva competencia entre los Consejos de Castilla é Indias, sobre á quién tocaba el conocimiento, por via de

fuerza, de ciertos mandamientos de inhibicion, despachados por el Nuncio de Su Santidad, á pedimento del recibidor de la órden de San Juan, sucesor en el derecho de los bienes de D. Juan Guiral, caballero de la misma órden, contra el juez de cobranzas del Consejo de Indias, que por su mandato procedia contra los bienes del dicho D. Juan Guiral sobre cobranza de maravedises, que éste debia á la Real Hacienda, como fiador de don Francisco Maldonado, descubridor de las provincias del Darien. Para determinar esta duda, fueron llevados los autos á la junta general de competencias, que decidió en 21 de Octubre de 1656, tocar y pertenecer al Consejo de Indias el conocimiento de todas las causas de fuerza en los reinos y provincias de Ultramar.

Cárlos III, por Real decreto de 29 de Julio de 1775, determinó que el Supremo Consejo de las Indias era de término, y concedió á sus ministros las propias prerogativas, exenciones y sueldos que gozaban los del Consejo y Cámara de Castilla: y por otro de 11 de Abril de 1785, para evitar las disputas de precedencias, que frecuentemente ocurrian entre los Ministros de algunos Consejos, volvió á declarar que los individuos de los de Castilla, Guerra, é Indias, gozaban los mismos honores; y en las conferencias ú otros actos semejantes, debian precederse indistintamente, por el órden de su respectiva antigüedad (ley 18, tít. 3.°, lib. 4.°, Nov.).

Al presidente correspondia repartir salas y negocios, proponer en el Consejo, y hacer despachar y ejecutar lo acordado. Votaba en los asuntos de gobierno, gracia y guerra; aunque no fuese letrado; y siéndolo, tambien en las visitas y residencias. Decidia las dudas sobre los negocios y su calidad, y entre consejeros, ministros y oficiales (tít. 3.°, lib. 2.° de la Rec. de las leyes de Indias).

A los consejeros les estaban prescritas, por regla general, las mismas reglas, que á los del de Castilla, y además algunas especiales, como la de no tener indios de repartimiento, ni encomienda de ellos, en mucho, ni en poco número, aunque residieren en Indias; las de no casar hijo ó hija con quien los tuviere, ó pretendiere tenerlos; y algunas otras (id. id.).

El gran canciller y registrador de las Indias tenia á su cargo los sellos Reales, sirviendo por medio de sus tenientes la cancillería y registro de todas las Reales cartas, provisiones y despachos, y nombraba á los cancilleres y registradores de las Chancillerías de las Indias, amovibles á su voluntad (tít. 4.°). Al fiscal correspondia la defensa de la jurisdiccion, Patrimonio y Hacienda Real de Indias (tít. 5.°). De los dos secretarios, auxiliado cada uno por dos oficiales mayores y dos segundos, tenia el uno á su cargo lo tocante al Perú, Chile, Tierra firme y Nueva Granada, y el otro las provincias de Nueva España, Guatemala, Filipinas, Nueva Galicia é Isla Española (tít. 6.°).

El tesorero debia dar fianzas y pagar lo que, por negligencia no cobrare de las penas, condenaciones y depósitos, y demás que era de su cargo; recibia de manos del fiscal las ejecutorias, y remitia á los oficiales de la Real Hacienda en Indias las que debian ejecutarse allí (tít. 7.°). El alguacil mayor podia usar vara de la Real justicia, y ejercia su oficio en los casos y cosas, que por el Consejo se le ordenaban (tít. 8.°). A los relatores (tít. 9.°), al escribano de Cámara (tít. 10) y á los contadores (tít. 11), les prescribian las Ordenanzas, con mucha prolijidad, el método y forma con que debian ejercer sus respectivos oficios. Los deberes del coronista mayor consistian (tít. 12) en escribir la historia de las Indias, así la general, como la particular de las principales provincias, debiendo al efecto averiguar las costumbres, ritos, antigüedades, y además escribir, y recopilar la historia natural en las yerbas, plantas, animales, aves, peces, minerales y demás cosas que fueren dignas de saberse y hubiere en las Indias. Por último, el cosmógrafo y catedrático de matemáticas del Consejo (tít. 13) habia de llevar noticia de las tierras, provincias, viajes y derrotas que habian de llevar los galeones y flotas; procurar que se averiguasen los eclipses de luna y otras señales, y circular su noticia con las instrucciones convenientes para que fuesen observados; recopilar derrotas, navegaciones y viajes; hacer las tablas de

cosmografía y el libro de descripciones, y esplicar diariamente, dividiendo en tres cursos anuales, las asignaturas de esfera, aritmética, tablas alfonsinas, navegacion, cosmografía y uso del astrolabio.

Despues de los acontecimientos políticos y militares que siguieron á la invasion francesa de 1808, quedó suprimido este Consejo; pero por cédula de 21 de Setiembre de 1810, se anunció á las autoridades de las provincias de Ultramar su restablecimiento en Cádiz.

La Constitucion de 19 de Marzo de 1812 separó de los consejos todo lo relativo á la administracion de justicia en lo civil y en lo criminal, y creó para la gubernativo un Consejo de Estado, compuesto de cuarenta individuos, de los cuales doce, por lo menos, deberian haber nacido en las provincias de Ultramar. En cumplimiento de estos preceptos constitucionales, un decreto de las Córtes de 17 de Abril del mismo año, organizó el Supremo Tribunal de Justicia, y mandó pasar definitivamente á él todos los negocios de que estuvieren conociendo los estinguidos Consejos de Castilla, de Indias y de Hacienda.

Por Real decreto de 2 de Julio de 1814 fué restablecido el de Indias, mandándose que continuase con las atribuciones, que tenia en 1.° de Mayo de 1808, y disponiéndose que que constara, como en los últimos tiempos, de tres salas permanentes, dos de gobierno y una de justicia. La planta de su personal superior fijaba el número de cinco ministros de capa y espada, y catorce togados, dos fiscales, dos secretarios y un contador, que eran las plazas, cuyo número estaba determinado por Reales decretos de 13 de Marzo de 1760, 29 de Julio de 1773, 26 de Febrero y 6 de Junio de 1776, 11 de Marzo de 1777 y 25 de Agosto de 1785. Sin embargo, los nombrados, al ser restablecido el Consejo, escedian de esta planta. En igual fecha de 2 de Julio de 1814, se restableció igualmente la Cámara de Indias, con las atribuciones que en lo antiguo tenia y con igualdad de tratamiento á la de Castilla, debiendo componerse por el pronto del presidente, tres ministros togados y dos de capa y espada; y reducirse al presidente, un ministro de capa y espada y tres togados, en cuanto el número total de consejeros quedase dentro de los límites señalados por la planta. Por Real cédula de 7 de Octubre de 1814 se dispuso que el Consejo volviese á disfrutar los arbitrios, que antes de 1808 le estaban señalados para sus precisos gastos, y consistian en una pension de dos mil pesos anuales sobre cada uno de los consulados de Lima, Méjico y Cádiz; la cuarta parte de los comisos hechos en Indias; el producto de las multas y condenaciones; y algunos otros de menor importancia.

Restablecida la Constitucion de 1812, fué cerrado de nuevo el Consejo, como todos los demás, en 9 de Marzo de 1820. La Regencia del Reino, por órden de 29 de Mayo de 1823, convocó á los ministros que habian sido del mismo, para que entrasen de nuevo en el ejercicio de sus funciones; pero esceptuando á los que habian servido al Gobierno constitucional, en cuya esclusion insistió en otra órden de 2 de Junio siguiente. El restablecimiento completo y definitivo fué decretado en 1.° de Octubre de 1823. En 28 de Noviembre de 1828 se espidió un Real decreto, mandando que el Consejo de Indias se compusiese de nueve togados, dos generales de los ejércitos, otros dos de la armada y dos intendentes: que estos seis últimos se escogieran entre los que hubiesen servido en los dominios de Indias, y fuesen amovibles; que percibieran sus haberes por los ministerios á que correspondia su carrera: no se nombraria para estas plazas sino á medida que vacaran las de capa y espada, y los contadores generales de ambas Américas continuasen siendo individuos natos del Consejo, pero sin opcion á las plazas de la Cámara.

Un Real decreto de 24 de Marzo de 1834 suprimió por tercera vez los Consejos de Castilla y de Indias, é instituyó un Tribunal Supremo de España é Indias con tres salas, de las cuales, las dos primeras debian entender en los pleitos y causas de la Península é Islas adyacentes, y la tercera en los de las provincias ultramarinas. Otro Real decreto de la misma fecha restableció el Consejo Real de España é Indias, dividiéndolo en siete secciones, denominando de Indias á la séti-

ma. Este Consejo fué suprimido en 1836. En 8 de Mayo de 1837 decretaron las Córtes que el Tribunal Supremo de Justicia siguiese conociendo de las apelaciones, competencias, recursos de injusticia notoria, segunda suplicacion y demás procesos judiciales, en que habia entendido el Consejo de Indias, con arreglo á la recopilacion de leyes de aquellas provincias.

En 23 de Agosto de 1854 fué suprimida la sala de Indias del Tribunal Supremo; pero se restableció poco despues, y por Real decreto de 26 de Marzo de 1858 se aumentaron en ella dos plazas de ministros, como poco antes se habian aumentado en las otras dos salas.

En la actualidad los negocios, de que conocia en lo antiguo el Consejo de Indias, se hallan distribuidos entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Cuentas del Reino, el Ministerio de Ultramar y el Consejo de Estado. En este último se han reunido por decreto de la Regencia de 16 de Octubre de 1870, las dos secciones de Hacienda y de Ultramar, que habian estado separadas desde el establecimiento de este alto cuerpo administrativo.

CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA. Era un cuerpo puramente consultivo. Fué creado por decreto de 1.° de Junio de 1843, en sustitucion de la Direccion general de estudios, cuya supresion se acordó en el mismo decreto, en el que se mandó que las atribuciones ejecutivas, que hasta entonces habia tenido esta, se agregaran al Ministerio de la Gobernacion.

Debia componerse de un presidente y de doce á veinte consejeros, pudiendo presidirlo el Ministro de la Gobernacion, siempre que lo estimase conveniente. El presidente y consejeros debian ser nombrados por el Gobierno, entre individuos distinguidos en las carreras científicas y literarias y profesores acreditados en la enseñanza. El cargo de consejero debia ser gratuito y honorífico, y compatible con cualquier otro destino. Se completaba esta organizacion con un secretario, que debia ser un oficial del Ministerio de la Gobernacion, en cuya secretaría se deberian instruir los espedientes, que hubieran de pasar al Consejo.

Por lo que respecta á sus atribuciones, se dispuso que el Consejo debia examinar y dar su dictámen cuando fuere consultado por el Gobierno: 1.°, sobre la creacion, conservacion y supresion de los establecimientos literarios: 2.°, sobre los métodos de estudio: 3.°, sobre los reglamentos de los establecimientos de instruccion pública: 4.°, sobre la provision de rectorados y cátedras: 5.°, sobre la remocion de rectores y catedráticos propietarios: 6.°, sobre los demas puntos relativos á la enseñanza, en que el Gobierno tuviera por conveniente oirle.

En los 25 años que ha tenido de existencia esta corporacion científica, ha sufrido muchas y notables modificaciones, así en su organizacion, como en sus atribuciones; de las que haremos mencion, guardando un órden rigorosamente cronológico, á fin de que, sobre este punto concreto, aparezca la influencia que en la direccion de la instruccion pública ejercen los principios políticos, que prevalecen en la esfera del poder, limitándonos á indicar las disposiciones que se refieren á pormenores de índole puramente reglamentaria.

En el plan de estudios de 17 de Setiembre de 1845, se determinó que el Consejo de Instruccion pública se compusiera de nueve consejeros, al menos, y quince, á lo más, siendo este cargo de nombramiento Real, honorífico, gratuito y compatible con cualquier destino, escepto con el de catedrático en activo servicio. Sus funciones eran dar su dictámen: 1.°, sobre creacion, conservacion y supresion de establecimientos de instruccion pública: 2.°, sobre los métodos de enseñanza y libros de testo: 3.°, sobre los reglamentos de toda clase de escuelas: 4.°, sobre la provision de cátedras: 5.°, sobre la antigüedad y clasificacion de los profesores: 6.°, sobre remocion de los catedráticos propietarios: 7.°, sobre las cuestiones que se suscitasen relativas al gobierno interior de los establecimientos y penas académicas: 8.°, sobre todo lo relativo á la enseñanza, en que el gobierno tuviera por conveniente oirle. El Consejo deberia tener un secretario de nombramiento Real, con voz.

pero sin voto, cuyo cargo seria retribuido (arts. 132, 133, 134 y 135).

En el reglamento, publicado para la ejecucion de dicho plan, su fecha 22 de Octubre del mismo año, se dispuso, en cuanto á la organizacion y atribuciones del Consejo, que sus individuos fueran elegidos con destino á alguno de los ramos siguientes: jurisprudencia, ciencias eclesiásticas, facultad de filosofía, ciencias médicas é instruccion primaria: que el presidente fuera nombrado por el Rey, de entre cualquiera de dichos individuos, y que en ausencias y enfermedades hiciera sus veces el vocal de mas edad: que además de las atribuciones, que se enumeraban en el artículo 134 del Real decreto de 17 de Setiembre, pudiera tambien el Consejo elevar al Gobierno de S. M. las esposiciones, que estimase convenientes, acerca de las reformas ó mejoras, que, en su concepto, fueran útiles á la instruccion pública: que el Consejo se dividiera en cinco secciones, á saber; de jurisprudencia y ciencias eclesiásticas, de ciencias médicas, de filosofía, de instruccion primaria y de disciplina universitaria: que cada seccion se compusiera de tres individuos, á lo menos, debiendo ser de este número los que estuvieren en el Consejo por el ramo respectivo: que un mismo consejero pudiera pertenecer á dos secciones diferentes, y que se nombrarian además comisiones especiales para los asuntos que lo exigieran (arts. 9.°, 10, 11, 12, 13 y 14). El Real decreto de 8 de Julio de 1847, que modificó el plan de estudios de 17 de Setiembre de 1845, consignó (artículo 102), que habria un Consejo de Instruccion pública, cuya organizacion se determinaria por un decreto especial; y en el 103 se fijaron sus atribuciones, que eran las mismas, que declaró el citado decreto de 1845.

En 17 de Febrero de 1848 se publicó el Real decreto, indicado en el art. 102, del de 8 de Julio de 1847, organizando el Consejo, y disponiendo en su artículo 1.° que se compusiera del Ministro del ramo, presidente; de un vice-presidente nombrado por el Rey, del director general de Instruccion pública, y de veintiocho consejeros. En el 2.°, que los consejeros se eligieran entre las clases siguientes: catedráticos en ejercicio, id. cesantes ó jubilados, doctores en las facultades, y sugetos de gran reputacion en la literatura ó las ciencias. En el 3.°, que el cargo de consejero de instruccion pública fuese honorífico y no devengase sueldo. En el 4.°, que el Consejo se dividiese en las siguientes secciones: instruccion primaria, filosofía, ciencias eclesiásticas, jurisprudencia, ciencias médicas, administracion y gobierno de la enseñanza de las escuelas, y sus fondos. En el 5.°, que la primera seccion se compusiera de siete vocales, á saber: tres especiales, dos de la seccion de filosofía, uno de la de ciencias eclesiásticas y otro de la de administracion; la segunda de siete, cinco especiales, uno de la de ciencias eclesiásticas y otro de la de administracion: la tercera de cinco, todos especiales; la cuarta de cinco, igualmente especiales; la quinta de siete, á saber, cinco médicos y dos farmaceuticos; y la sesta de nueve, tres especiales, uno correspondiente á cada una de las demás secciones, y el secretario general. En el 6.°, se ordenó que el vice-presidente no perteneciera á seccion alguna y pudiera presidirlas todas, con voz y voto. En el 7.°, que el director general de instruccion pública fuese individuo nato de todas las secciones. En el 8.°, que hubiera un secretario general, que deberia ser oficial del Ministerio; que en cada seccion hiciera de secretario el mas jóven, que presidiese el mas anciano, y que el secretario general lo fuera especial de la sesta seccion. En el 9.°, que los consejeros tuviesen voz y voto en toda clase de cuestiones, que sometieran al dictámen del Consejo pleno, escepto en las que se refirieran á asuntos del profesorado público, en los cuales no podian intervenir de modo alguno los catedráticos en ejercicio. En el 10, que el Consejo de instruccion pública diera su dictámen, siempre que fuere consultado por el Gobierno, ó cuando lo prescribieran los reglamentos, y lo verificara en pleno ó por secciones, segun se determinase en los diferentes casos. En el 11, que el Consejo pleno fuese especialmente consultado: sobre la formacion ó reforma del plan general de estudios; sobre la creacion ó ó supresion de escuelas ó establecimientos

científicos y literarios de toda clase; sobre escuelas, á la sazon existentes, y sobre remocion de los catedráticos propietarios. Disponíase en el 12 que pudieran ser consultadas las secciones respectivas, sobre los métodos de enseñanza, organizacion de los establecimientos, libros de texto y calificacion de obras para premiar á sus autores: sobre los espedientes de oposicion para el nombramiento de catedráticos: sobre antigüedad y clasificacion de los profesores: sobre las cuestiones que se suscitasen, relativas al gobierno interior de los establecimientos, su disciplina y administracion; y finalmente, en el artículo 13 se decia que un reglamento interior determinaria los pormenores de la organizacion del Consejo, y el régimen del ejercicio ordinario y estraordinario de sus funciones. Este reglamento, comprensivo de 38 artículos, se publicó en 8 de Marzo de 1849.

En 23 de Junio de 1854 se dió nueva organizacion al Consejo, por virtud de la cual, cesaron todos los vocales, que estaban desempeñando cátedras en la Universidad central: mas por Real decreto de 25 de Agosto siguiente, se dejó sin efecto el de la fecha citada, y se mandó que continuaran desempeñando sus plazas los vocales, que lo componian en 23 de Junio anterior.

Vino aun la ley de instruccion pública, de 9 de Setiembre de 1857, á dar nueva forma al Consejo, disponiendo que se compusiera de treinta individuos, y un presidente, nombrados por el Rey, pudiendo recaer el nombramiento de consejeros, en los que hubiesen sido ministros de Instruccion pública, directores generales del ramo, consejeros del mismo, ó por espacio de seis años, á lo menos, rectores de Universidad: en dignidades de iglesia metropolitana ó catedrales, que tuvieran el grado de doctor: en individuos de las Reales academias, no pudiendo haber á la vez mas de uno en concepto de representante de cada una de ellas: en inspectores generales de los cuerpos facultativos del Estado en el órden civil: en catedráticos numerarios de facultad ó enseñanza superior, que hubieran ejercido este cargo en propiedad por espacio de doce años, y salido de la carrera del profesorado con buena reputacion científica. El Gobierno podia proveer hasta cinco plazas de consejero en personas que, aunque no perteneciesen á las categorías espresadas, hubieran dado, por sus escritos ó trabajos científicos ó literarios, positivas pruebas de eminente saber en cualquiera de los ramos que comprende la instruccion pública. Se creaban cinco plazas de consejeros, dotadas con el sueldo anual de 40,000 reales, que habian de recaer precisamente en catedráticos de facultad ó enseñanza superior, que hubieren llegado á la categoría de término, ó sido rectores, por espacio de tres años, y contasen además, en uno y otro caso, quince años de antigüedad en el profesorado; no pudiendo haber á un mismo tiempo dos consejeros retribuidos, que procedieran de la misma facultad ó enseñanza superior. Se declaraba consejeros natos al director general de Instruccion pública, al rector de la Universidad central, al fiscal del Tribunal de la Rota, y al vicario eclesiástico de Madrid. El cargo de consejero era incompatible con el de catedrático en activo servicio, y lo era con todo otro cargo público el de consejero retribuido. El Consejo debia dividirse en cinco secciones, á saber: de primera enseñanza, de segunda enseñanza, de bellas artes y de filosofía y letras, de enseñanzas superiores y profesionales, de ciencias exactas, físicas y naturales; y de ciencias médicas, de ciencias eclesiásticas y derecho. Los consejeros podian pertenecer á mas de una seccion, cuyos presidentes serian de nombramiento Real; y en ellas desempeñarian el cargo de ponentes los consejeros retribuidos. El Gobierno deberia oir al Consejo, en la formacion de los reglamentos generales y especiales que deberian espedirse para el cumplimiento de la ley de instruccion pública, y en toda modificacion que hubiera de hacerse en ellos: en la creacion ó supresion de cualquier establecimiento público de enseñanza, y en las autorizaciones que exije la misma ley para los establecimientos privados, escepto la creacion de escuelas de primera enseñanza: en la creacion ó supresion de cátedras: en los espedientes de provision de cátedras y de los de clasificacion, antigüe-

dad, categorías, jubilacion y separacion de los profesores: en la revision de programas de enseñanza y en las modificaciones que de ellos se hicieren: en la designacion de libros de testo; y en los demás casos, que previene la citada ley ó espresasen los reglamentos. Seria consultado tambien, en pleno ó por secciones, siempre que el Gobierno lo estimase conveniente, en los casos de duda y de importancia. Se disponia, por último, que un oficial de secretaría del Ministerio de Fomento, nombrado por el Gobierno, fuera el secretario general del Real Consejo de instruccion pública (art. 245 al 258).

La ley de 9 de Setiembre de 1857 estuvo vigente por espacio de nueve años, durante los cuales conservó el Consejo la planta y organizacion que se le dió en la misma; pero esta se varió por Real decreto de 9 de Octubre de 1866, segun el cual, debia componerse de veinticuatro vocales, además del presidente, siendo el cargo honorífico y gratuito. Para ser nombrado consejero se necesitaba pertenecer ó haber pertenecido á alguna de las categorías siguientes: Ministros de la Corona, arzobispos y obispos, consejeros Reales y de Estado, directores generales de instruccion pública, que hubieran sido catedráticos de facultad, ministros y fiscales de los tribunales supremos, individuos de las Reales academias, no pudiendo haber mas de uno en representacion de cada academia; rectores de universidad, con seis años de desempeño del cargo, catedráticos numerarios de facultad ó enseñanza superior, que hubieran servido, por lo menos, quince años y salido del profesorado con buena nota, é inspectores generales de los cuerpos facultativos del Estado en el órden civil. El Gobierno podia proveer hasta cuatro plazas de consejero, en personas que no perteneciesen á las categorías espresadas; pero que, por sus escritos y trabajos científicos, hubieran dado pruebas de eminente saber, ó prestado muy distinguidos servicios á las ciencias y á la enseñanza. Se declaraba consejeros natos al R. Obispo auxiliar de Toledo y al fiscal de la Rota. Se disponia asimismo que el Consejo se dividiera en tres secciones, que serán: de primera enseñanza; de segunda enseñanza y bellas artes; y de facultades y escuelas superiores y profesionales; debiendo hacerse por Real decreto especial el nombramiento de presidente de cada seccion. Estas podian dividirse en comisiones, para la mejor distribucion de los negocios, turnando los consejeros en el cargo de ponentes, y dicho cargo de consejero era incompatible con el de catedrático en activo servicio.

El Consejo debia ejercer la alta inspeccion sobre la enseñanza pública, á cuyo fin podia conferirse á sus individuos la comision régia de visitar universidades, ú otros establecimientos públicos dependientes del Gobierno, y de entender en ellos en asuntos graves y de naturaleza urgente, dictando desde luego providencia; y debia el mismo ser oido por el Gobierno en la provision de cátedras, traslacion, ascenso y separacion de profesores; en la creacion y supresion de establecimientos públicos de segunda enseñanza y de enseñanzas superiores; en los planes y reglamentos de enseñanza, y en todos los demás asuntos de instruccion pública, que, por su índole é importancia, exigieran, á juicio del Gobierno, deliberacion y detenido exámen. Le correspondia tambien formar la lista de los libros de texto para todas las asignaturas; pero los que se refirieran á ciencias eclesiásticas, y estudios de moral y religion, habian de elegirse precisamente entre los aprobados por la autoridad eclesiástica; sin perjuicio de mantener siempre espedito en todas las demás obras, señaladamente las filosóficas, por lo que toca á la pureza de la fé y costumbres, el derecho que á los prelados reconocen los artículos 2.° y 3.° del Concordato vigente. Los individuos del Consejo no podrian incluir en las listas de textos las obras de que fueren autores ó traductores. Un oficial de secretaría, perteneciente á la direccion general de instruccion pública, debia ser el secretario general del Consejo.

Tal era la organizacion y atribuciones del Real Consejo de Instruccion pública, cuando, por decreto del Gobierno provisional, fecha 10 de Octubre de 1868, fué suprimido, y relevados nominalmente de sus cargos, el presidente y consejeros.

CONSEJO DE ITALIA. Nuestra adquisicion definitiva de las Dos Sicilias en 1803, hizo sentir la necesidad de crear un Consejo para aquellos dominios, que continuó rigiendo, hasta que por la paz de Utrech, Felipe V, en 1713, debió renunciar y renunció á ellos.

CONSEJO DE MINISTROS. Sabido es que, antiguamente, los que despues se han llamado Ministros de la Corona, se nominaban simplemente *Secretarios del despacho*; porque, ciertamente, solo en ese concepto despachaban privadamente con el Rey, que ordenaba, en resoluciones marginales á veces, lo que estimaba oportuno. De aquí que los *Secretarios del despacho* no gozasen ante el país el concepto oficial y especie de autonomía, que han gozado despues los Ministros responsables. Entonces aseveraban, y podria decirse que certificaban, de lo que, despachando con ellos, ordenaba el Monarca; hoy son de ello responsables. Al aislamiento administrativo, que era consiguiente á tal organizacion en el despacho, se siguió mayor unidad, aconsejada por la necesidad y la conveniencia, y el conjunto de secretarios del despacho formó una especie de consejo, que de la circunstancia de despachar personalmente con el Rey en su propio gabinete, se denominó, y aun hoy se denomina, la reunion consultiva y oficial de los Ministros, *Consejo de gabinete*, y simplemente el *gabinete*, como por igual circunstancia, de despachar con el Rey en su propia Cámara, hubo el célebre Consejo denominado *Cámara*, *Consejo de la Cámara*, y *Cámara de Castilla*.

Para dar, pues, unidad y prestar vigor á la reunion oficial y consultiva de los secretarios del despacho, Felipe V, por resolucion de 30 de Noviembre de 1714 (ley 4.ª, tít. 6.º, libro 3.º, Nov.) creó el que se llamó *Consejo de gabinete*, en el cual cada secretario presentaba instruidos los negocios y cuestiones de Estado, que correspondian á su secretaría, y el Consejo discutia, y presidido por el Rey, y con su autoridad, deliberaba.

Andando el tiempo, y sintiéndose cada vez mas la necesidad de dar unidad y acierto á los secretarios del despacho, se creó privadamente, ó sin publicidad oficial, una junta de consejeros que ilustrase y reforzase la accion del Consejo de gabinete; hasta que, por Real decreto de 8 de Julio de 1787, la junta fué elevada á *Junta Suprema de Estado* (nota á la ley 1.ª, tít. 7.º, lib. 3.º, Nov.), que se reunia en la primera secretaría de Estado.

Es de notar que la Junta Suprema de Estado coexistia con el Consejo de Estado; pero Cárlos IV, por Real decreto de 28 de Febrero de 1792 (ley 1.ª, tit. 7.º, id.), rehabilitando al dicho Consejo, que habia sido suspendido y aun suprimido, ordenó que en adelante los secretarios del despacho, por causa de su destino, fuesen individuos ordinarios del mismo, al que llevarian las cuestiones de su peculiar departamento, en las cuales solo tendrian voto deliberativo. Los consejeros y los secretarios del despacho se sentarian en el Consejo por rigorosa antigüedad, como se practica despues; pero entendiéndose antigüedad de Ministerio, segun la creacion de los mismos; salvo por supuesto, el presidente que siempre lo es.

Con varias y notorias vicisitudes corrieron así las cosas, hasta que el Rey Fernando VII, por Real decreto de 19 de Noviembre de 1823, creó un *Consejo de Ministros*, en el cual se tratarian colectivamente las cuestiones peculiares de cada secretaría. Cuando no presidiese el Rey, lo verificaria el primer secretario del despacho (hoy Ministro de Estado). Todas las resoluciones se consignarian en un libro, que se llevaria al efecto, el cual estaria á cargo del secretario del despacho de Gracia y Justicia.

En Real decreto de 31 de Diciembre de 1824, para evitar dudas sobre la presidencia del Consejo, se ordenó que, cuando el Rey no se hallara presente, lo presidiera el primer secretario del despacho (el Ministro de Estado), reputándose y denominándose en adelante Presidente del Consejo de Ministros, y estableciéndose reglas para la marcha del Consejo, que hace útil consultar este Real decreto.

Nuestras respectivas Constituciones políticas, declarando inviolable la persona del Mo

narca, y solo responsables los Ministros, han hecho mas y mas necesario la organizacion y ejercicio del consejo de ellos; y por eso vemos que, formalizado el régimen constitucional, lejos de disminuir las precauciones, adoptadas por los Monarcas en cuanto á dicho Consejo, se han venido ampliando y mejorando. Así es de notar que el presidente no lo es ya siempre el Ministro de Estado; sino que es nombrado especialmente; unas veces con cartera; otras sin ella: que se establece y reputa garantía de acierto la intervencion del Consejo de Ministros, en asuntos graves, y que requieren circunspeccion: y que esta confianza en tales decisiones, no es solo del legislador; sino del comun de ciudadanos. Una cosa, si, es aun necesaria, y es que la accion del Consejo se ejerza con sistema y fijeza, y con mayor economía la autonomía individual de los Ministros.

Hemos visto que en un principio el Consejo de Ministros tuvo secretario, y que lo era el del despacho de Gracia y Justicia. Despues, especialmente en el régimen constitucional, el secretario era nombrado de Real órden, y no del cuerpo de Ministros. Pero en 1848, tomada en cuenta la responsabilidad de estos, y que el secretario no estaba ligado con esta responsabilidad, mientras participaba de los secretos mas íntimos del gabinete, se acordó suprimir el cargo, y que cuando, por la índole de algun negocio, fuese conveniente levantar acta, lo hiciese el Ministro de Gracia y Justicia, en su calidad de notario mayor de reinos, y ese es hoy el estado de las cosas. Cuando se quiere revestir una determinacion de toda la autoridad de que es capaz, se la dicta con la fórmula, de *acuerdo*, ó *prévio acuerdo de mi Consejo de Ministros*, habla en ella personalmente el Soberano, firma con media firma, y todos los Ministros firman con él, con firma entera; si bien, por una reminiscencia de cuando estos funcionarios no eran sino secretarios del despacho, y aun requiriendo las formas constitucionales firma con rúbrica, no rubrican; aunque en los últimos tiempos anteriores á la revolucion de 1868, algunos Ministros añadian á la firma la rúbrica. Véase **MINISTRO**.

CONSEJO DE NAVARRA.

Los Monarcas de Navarra, en la Edad media, no tuvieron en un principio Consejo. Despues lo reunian, cuando lo necesitaban para la decision de algun negocio importante; pero sin que durante mucho tiempo adquiriera carácter de permanencia. El cap. 1.° del título 1.°, libro 1.° del Fuero general, decia: *Et rey ninguno, que no hobiese poder de facer cort sin consejo de los ricos hombres naturales del regno*. El cap. 3.° del mismo título disponia que para juzgar á los infanzones, acusados de traidores, ladrones ó malhechores, el Rey se hiciese asistir del alcalde de la comarca, y al menos tres ricos hombres é infanzones instruidos.

Alguno, por la palabra *cort*, creyó que en este fuero general y en otros particulares, se entendia lo que hoy significa la voz *Córtes* del reino. Pero es muy claro que se queria espresar la idea de Consejo. Con mucha frecuencia este, no solo no se limitaba á atribuciones consultivas; sino que, por delegacion del Rey, administraba justicia en los pleitos y en los juicios criminales.

Don José Yanguas, en su *Diccionario de antigüedades*, ha reunido algunas noticias sobre los progresos que la *cort mayor*, Consejo y Tribunal de los Reyes de Navarra, hizo desde el siglo XIII. En 1244 estaba sin dotacion fija de personal, pues habiéndose suscitado pleito entre los parroquianos de San Juan y de San Miguel de Estella, sobre el derecho de tener mercado, el Rey mandó juntar la córte en Pamplona, y concurrieron á ella el obispo, muchos ricos hombres, caballeros y hombres de rua, los cuales juzgaron la cuestion. En el año 1330 aparece ya cierta organizacion permanente, pues cada alcalde de córte tenia señalado salario de dos sueldos diarios y por la avena de tres caballos tres sueldos y cuatro dineros: y el notario del Tribunal, seis dineros diarios y trece dineros por la avena de un caballo. En 1392 constan como consejeros del Rey, además de varios alcaldes de córte, el obispo de Bayona, el chanciller y varios caballeros. En una sentencia del año 1413 se lee: «Por el Rey los alcaldes y otros de su Consejo, presentes.»

Por entonces los alcaldes de córte eran cuatro, segun las Ordenanzas de Cárlos III el *Noble*, que declaraban estar así establecido de antiguo, debiendo entender en la administracion de justicia estos cuatro jueces, el uno por el Rey, otro por el brazo de la Iglesia, otro por el de los ricos hombres é hijos-dalgo, y el cuarto por el de las buenas villas, aunque siendo hechos todos los nombramientos por el Rey. En dichas ordenanzas de Cárlos III se instituyó un procurador fiscal, con 400 libras de sueldo, y un abogado con 200. En 1450 se dispuso que los alcaldes de córte no viesen pleitos en el Consejo, y asistieran solamente para informar. En 1496 se vé ya funcionando el Consejo, como Tribunal de apelacion de la Cámara de Comptos. Por último, los reyes D. Juan de Labrit y Doña Catalina deslindaron con claridad las atribuciones de ambos tribunales de Consejo y Córte, siendo éste de primera instancia y el Consejo para las apelaciones, aunque, como sucedia en Castilla, solia prevenir ó avocar á sí el conocimiento de los negocios antes de que los alcaldes los juzgasen.

Desde los primeros años del siglo XVI, el Consejo Real de Navarra funcionó ya con carácter de permanencia y con atribuciones definidas. El presidente solia ser en los primeros tiempos un prelado, y además habia seis consejeros. Su residencia debia ser precisamente en Pamplona, de donde no podian ausentarse sin licencia del presidente. Las cosas de mucha gravedad debian someterlas al Rey, así como todas las demás, en que por cualquiera razon creyeran mas conveniente limitarse á esponer su dictámen, que resolver por sí mismos, así en los negocios de justicia, como en los de gobierno.

Las funciones de fiscal del Consejo, de abogado Real, y de abogado patrimonial se mandaron reunir en una sola persona desde 1526.

Para el servicio del tribunal y el despacho de los negocios habia ademas sustitutos fiscales, diligencieros del fiscal de S. M., que intervenian en los asuntos de hidalguía, cédulas de informacion, y en otros; un alguacil mayor y sus tenientes, merinos y tenientes de merino, relatores, secretarios del Consejo, escribanos de córte, escribanos reales, notarios apostólicos, depositario general, receptores de penas y gastos, repartidor de las receptorías, comisarios y receptores, tasador de procesos y probanzas, archivero, procuradores, solicitadores, ugieres del Consejo y córte, y cámara de comptos, apuntador ó multador, y otros curiales y oficiales. La esplicacion de las respectivas atribuciones se contiene por menor en las Ordenanzas del Consejo Real y del Reino de Navarra, impresas por órden del mismo Consejo, de 19 de Abril de 1622.

En la planta y organizacion de este Consejo hubo menos número de modificaciones que en los que tenian su residencia en Madrid. Los navarros defendieron con constancia su privilegio de que sus negocios particulares fuesen juzgados y resueltos dentro de Navarra. El Consejo de Castilla despachaba algunas veces cédulas para que tuvieran su ejecucion en aquel reino; mas por ley hecha en las Córtes de Sangüesa de 1561, que es la 28, título 4, lib. 1.° de la Novísima Recopilacion de las de Navarra, se dispuso que tales cédulas fuesen obedecidas, pero no cumplidas. Otra ley, hecha en Córtes de Pamplona, de 1632, que es la 52 del mismo título, modificó la anterior, mandando que el Consejo de Navarra remitiese al Rey relacion de los pleitos que pendiesen contra él, y declarando que no era contra el fuero de aquel reino la noticia enviada á los Consejos de Castilla, si no se hacia para que estos conociesen de ella.

Todo lo gubernativo y todo lo judicial era de la competencia del Consejo; y en gran parte es exacta la observacion hecha por D. José Alonso, en la introduccion á su libro sobre los fueros de Navarra, de que á juzgar por las formas de instruccion y de resolucion de los negocios, en Navarra y en su Consejo todo era judicial, nada gubernativo. Si un pueblo queria ejecutar una obra pública, lo solicitaba en escrito, firmado por un procurador, bajo direccion de abogado, como si se tratase de una demanda, y se pasaba al ministerio fiscal, siguiéndose la sustanciacion como la de un juicio entre partes.

En 1812 fué suprimido el Consejo de Navarra, al mismo tiempo que todos los demás del antiguo régimen; restablecido, como ellos, en 1814; vuelto á suprimir en 1820, y á restablecer en 1823, y definitivamente desapareció en 1835, pasando sus atribuciones gubernativas á las autoridades administrativas de la provincia y al Gobierno supremo, y las judiciales á la nueva Audiencia territorial creada en Pamplona. Véase además la conclusion del artículo CÓRTES DE NAVARRA.

CONSEJO DE LAS ÓRDENES. En un principio lo fué solo de las Ordenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara: despues, incorporada la Corona de Aragon á la de Castilla, era relativo tambien á la de Montesa, como dirémos.

En el artículo ÓRDENES MILITARES, y otros correlativos, esponemos el orígen de las mismas, sus vicisitudes, sus servicios, y su poder, que llegó á ser grande. El jefe y superior de cada una se denominaba *Maestre*, y *Gran Maestre*, y tenia un consejo de caballeros y hombres de la órden, que le auxiliaba en el desempeño de sus complejas atribuciones, que, como desde luego se comprende, eran de *órden*, *espirituales*, *militares*, *administrativas* y de justicia. Como procedian de bulas pontificias, aceptadas por los Soberanos, y de concesiones gratuitas de ello, no podian descansar en mas firmes apoyos. Esto, y la lucha contra la morisma, que las hacia necesarias, aumentaba su poder é importancia. Vencida la morisma, la falta de lucha armada hizo que los Maestres tomasen parte en la política. La historia les hace responsables de algunas agitaciones y disturbios: el poder de los Maestres llegó á ser temible á la Corona, y las gestiones de esta, acogidas y secundadas por la Santa Sede, dió por resultado, primero, la incorporacion personal, y por tanto temporal, de los maestrazgos á la Corona, despues la perpétua; y esto aun recayendo en hembra el poder soberano. Véase MAESTRE, MAESTRAZGO. Pero en el segundo caso, al declarar Adriano VI incorporados perpétuamente á la Corona de Castilla, los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara (4 de Mayo de 1523, en la persona de Cárlos V); y despues Sixto V (15 de Marzo de 1587), el de Montesa, lo fué con cláusula espresa de que los Monarcas, ya grandes Maestres de las órdenes, para el ejercicio de la jurisdiccion espiritual, habian de nombrar *personas religiosas de la misma órden*, si bien, amovibles *ad nutum*. (Nota 1.ª, tít. 8.º, lib. 2.º Nov. Rec.)

Pero los Maestres, sobre la jurisdiccion *espiritual*, y propia de su instituto religioso militar, ejercian tambien la temporal *atribuida*, ó concedida sucesivamente por gracia de los Monarcas. Dicho se está que los maestrazgos se incorporaron en esta forma á la Corona: que ésta procuraria conservar el prestigio de esta alta dignidad é institucion que ya le pertenecia; y de aquí, para mejor responder á estos fines, la creacion de un *Real Consejo de las Ordenes militares*, cuerpo administrativo, consultivo y *judicial*, con atribuciones espirituales, en cuyo concepto revestia en sus casos el de metropolitano de las Ordenes. Así se evidencia por la historia, y por disposiciones legislativas: y Riol, en su acreditado *Informe sobre archivos*, dice así: «El Real Consejo de las Ordenes tuvo principio en el año 1489, erigiéndolo los señores Reyes Católicos, con el motivo de haber obtenido de la Santa Sede la administracion *perpétua* de los Maestrazgos de las tres órdenes militares, de Santiago, Calatrava y Alcántara, para el despacho de los negocios, dependencias y causas de justicia, gobierno, provision de encomiendas, prioratos, curatos y beneficios eclesiásticos, empleos políticos y otros oficios públicos de las mismas órdenes y su territorio; recepcion de caballeros, conocimiento de sus causas civiles y criminales, y otras que corren por este Consejo, al cual comunicaron la jurisdiccion Real, para darle mayor autoridad y representacion, y para que la tuviera en el ejercicio de la eclesiástica, concedida por la Santa Sede á cada una de las tres órdenes, y á sus Maestres, en los cuales fueron subrogados los señores Reyes Católicos y sus sucesores, por la union perpétua de los maestrazgos á la Corona. Formaron el Consejo de caballeros profesos de las mismas órdenes, de capa y espada, y de tres secretarios, uno de cada órden, los cua-

les constituyeron cuerpo del Consejo y determinaban todos los negocios y espedientes, que no eran puramente de justicia. Para el despacho de estos habia jueces de letras, que, como asesores, juntos con caballeros, diputados por las mismas órdenes, entendian y decidian los espedientes de justicia, á los cuales, por lo regular no asistian los secretarios; sino los tenientes, que ellos mismos nombraban, como se dirá despues. Tuvo el Consejo en los tiempos sucesivos distintas formas, reduciéndolo á un cuerpo, comun á las tres órdenes, compuesto de un presidente, ocho consejeros togados, un secretario, y un fiscal, procuradores generales, alguacil mayor, dos relatores, dos escribanos de cámara, uno para la de Santiago, y otro para la de Calatrava y Alcántara, cancilleres ó registradores, contador mayor, tesorero y otros empleos.»

Al principio de su creacion no intervenia el Consejo en los asuntos de la Orden de Montesa, cuyo maestrazgo no se habia incorporado aun: ni al principio de su incorporacion; porque habiéndose determinado en la bula de incorporacion que S. M., para la administracion espiritual, se habia de valer de sugetos idóneos de la misma Orden, consultando el acierto, fué preciso elejir un asesor general, que residiera al lado del Rey, para aconsejarle en todo y ejercer inmediatamente la jurisdiccion, así en lo espiritual, como en lo temporal, respecto de todos los súbditos, caballeros, religiosos y vasallos, segun que para todo esto consta que dió el Rey facultad á D. Diego Covarrubias, Regente del Consejo supremo del reino de Aragon, en 20 de Enero de 1593, mandándole tomase el hábito de la Orden, y que procediese aconsejado de los ministros de dicho Consejo (Samper, Partida 3.ª, núm. 711).

En virtud de este decreto, intervino el Consejo de Aragon en todos los asuntos pertenecientes á la Orden de Montesa, hasta 1707, en que fué suprimido, encargando entonces al de las Ordenes el conocimiento de los negocios, en la misma forma que lo practicaba respecto de las demás.

Esta medida tenia el carácter de provisional, pues, para la agregacion definitiva se necesitaba una bula pontificia, que se solicitó y obtuvo en 1739, concediendo la supresion del cargo de asesor general, y mandando que, tanto en las cosas espirituales, como en las temporales, se gobernase por el Consejo de las Ordenes, con la asistencia de un caballero profeso de la misma, y así se ha practicado comunmente, no solo en la primera: sino en las ulteriores instancias. Aparece de dicha bula que S. M. solicitó, y Su Santidad espidió, y se consignó en el decreto de aceptacion y ejecucion, que habian de quedar salvos é ilesos todos los estatutos y definiciones de la Orden.

Desde su primera planta ha sufrido el Consejo Real de las Ordenes en su organizacion no pocas modificaciones y reformas. En 1684 se hizo un arreglo, determinando que hubiera un presidente, ocho consejeros y un fiscal.

Por decreto orgánico de 1691 se estableció la planta de un presidente, siete oidores, y un fiscal, y se creó además la secretaría, que habia de constar de un secretario y cinco oficiales. Por otro de 1713, se fijó la de dos presidentes, doce consejeros, todos togados, un fiscal, un abogado general, y un secretario en jefe. En 1715 se mandó que se compusiese de un presidente, ocho ministros, un fiscal y un ministro además por la órden de Montesa; ratificándose esto mismo en 1717. Por decreto de 1791 se añadieron á este número dos por la órden de Cárlos III, tres fiscales mas, y cuatro procuradores generales.

Cuando cesaron los Consejos, diseminándose sus miembros en 1808, á la entrada de los franceses en Madrid, por un decreto de la suprema Junta central, su fecha 25 de Junio, de 1809, se creó un Consejo y Tribunal Supremo de España é Indias, y se nombraron para él ministros del de las Ordenes, mandándose además que los asuntos eclesiásticos y religiosos de las órdenes militares, concursos y elecciones ó propuestas á S. M. para los destinos de esta clase, se trataran en comision ó junta particular por tres caballeros profesos de ellas, ministros del mismo Consejo, con arreglo á sus especiales consti-

tuciones. (Urra, *Sencillas observaciones acerca de la prerogativa maestral.*)

Verificada la variacion de sistema político en 1812, y hasta una reforma total de tribunales, no podia menos de sufrirla el que vamos mencionando; pero conociendo la necesidad de un cuerpo ó institucion, que entendiese en los negocios religiosos de las Ordenes, y que ejerciera la jurisdiccion eclesiástica, por las reglas que prescriben las bulas pontificias, se determinó la creacion de un tribunal, por decreto de las Córtes, de 17 de Abril de dicho año. Segun él, debia componerse de un decano, de cuatro ministros y un fiscal, todos letrados, con los mismos honores y sueldo que tenian los del Consejo, y se declaró el tratamiento de *alteza* al tribunal en cuerpo. Vuelto el antiguo gobierno del Rey, se restableció el Consejo Real de las Ordenes militares, en 8 de Setiembre de 1814, con la misma jurisdiccion y facultades que tenia en Marzo de 1808, debiendo tener un presidente, caballero de una de las cuatro órdenes, ocho ministros, tambien caballeros, dos por cada una de las cuatro órdenes, un fiscal, un secretario y un caballero procurador general, y formarse dos salas, una de gobierno y otra de justicia. En el mismo decreto declaraba S. M., que entonces no era su ánimo usar de la facultad concedida por el breve de Su Santidad Pio VI, de 25 de Abril de 1789, de poder elegir y nombrar ministros de este Consejo, á caballeros de la Real y distinguida órden de Cárlos III, porque todos habian de ser de las demás, en la forma dicha.

Mandaba tambien que el Consejo se encargase de la administracion de las Mesas Maestrales y sus rentas; que no hubiese mas que un procurador general, y que se restableciese el juzgado y protectoría de iglesias. Hubo época en que se cuestionó si podrian ser consejeros los *freiles ó freires* clérigos de las Ordenes, en lo que estos insistieron mucho, sin poder conseguirlo los priores y comunidades eclesiásticas de aquellas; pero, constantes en su propósito, y apoyados en un ejemplar, único que habia habido, lograron al fin que se declarase así, por Real decreto de 23 de Febrero de 1818, «debiendo prévia y únicamente calificar su nobleza, del mismo modo que lo hacen los caballeros, siendo al mismo tiempo abogados ó licenciados por Universidad mayor; pero en manera alguna armarse de caballeros, por ser la voluntad de S. M. que sirvan sus respectivas plazas conservando siempre su carácter de *freiles* clérigos.

Otra nueva supresion sufrió el Consejo de las Ordenes en 20 de Marzo de 1820, en que se restableció el tribunal de 1812, que á su vez fué suprimido en 1823; y desde entonces continuó con ocho ministros, un secretario, un fiscal, y tres caballeros procuradores generales.

Esta era la dotacion personal, que tenia en 1836, cuando, por Real decreto de 30 de Julio, se redujo esta planta á un decano, cuatro ministros y un fiscal; un caballero procurador general, para las cuatro Ordenes militares, un agente fiscal, un escribano de cámara y un relator; un canciller registrador, cuatro porteros, un secretario, cinco oficiales, dos escribientes, un archivero, y un escribiente del archivo: y aunque por este decreto quedó con la denominacion de Consejo, por una simple Real órden se modificó en cuanto á la denominacion, y se le dió el de *Tribunal especial* de las Ordenes.

Si muchas han sido las alteraciones hechas en el Consejo, con respecto á su organizacion, no han sido menos las que ha sufrido con respecto á sus atribuciones, desde que se celebró en 1527, la concordia llamada del *conde de Osorno*, que debia observarse sobre el conocimiento de los procesos civiles y criminales de los comendadores y caballeros de la órden de Santiago, y es la ley 1.ª, tít. 8.º, libro 2.º, Nov. Rec., en la cual dispuso el Emperador Cárlos V que los pleitos sobre villas, lugares, castillos y fortalezas, jurisdicciones, vasallos, términos, dehesas, rentas, y derechos Reales, se siguieran ante los jueces seglares, bien fueran el comendador, la órden ó la mesa maestral, actores ó reos: que guardándose lo que siempre se habia hecho, en los lugares donde la órden de Santiago tenia la jurisdiccion temporal, se reservasen las segundas apelaciones á la Corona Real y á sus jefes y oficiales: que en las otras causas civi-

les, los comendadores de dicha órden, siendo actores ó reos, fueran demandantes y demandados ante las justicias seglares; pero cuando el pleito fuere entre dos comendadores, pudieran comparecer donde quisieran, como siempre se habia hecho: que si los comendadores y caballeros de la órden de Santiago fueren reos de delito de herejía, pecado nefando, lesa majestad, ó de otra manera de traicion ó rebelion contra la persona del Rey, de alteracion del órden público, ó quebrantadores de cartas y seguros Reales, ó rebeldes y desobedientes al Rey y á sus mandatos, ó culpables en cualquier concepto de estos delitos, fuesen castigados libremente por las Audiencias y justicias seglares: que en otros delitos atroces, no siendo de los espresados, como si fuesen aleves ó forzadores, ó públicos robadores é incendiarios, escandalizadores ó quebrantadores de iglesias y monasterios, ó incurriesen en otros delitos semejantes y calificados, hubiese lugar á prevencion entre las justicias Reales y la de dicha órden; pero en delitos y escesos menores que los relacionados, aunque por ellos se deba imponer pena de muerte, ó cortamiento de miembro, ó destierro perpétuo, solo pueda conocer la justicia ordinaria de las diligencias, encaminadas á la averiguacion del delito y prision del delincuente, que deberá luego entregar con aquellas á los jueces de la Orden.

Se dispone igualmente en la misma concordia que, si algun comendador ó caballero de la Orden delinquiere en presencia del presidente y los del Consejo del Rey, ó ante el presidente y oidores de cualquier Audiencia, alcaldes de Córte, ó del gobernador, alcaldes mayores del reino de Galicia, que le puedan castigar por ello; y si delinquiere ante algun corregidor, alcalde, ú otro juez, desacatándolo, si el esceso fuese poniendo manos en alguna persona, que tal juez pueda castigarle por este desacato; pero si consistiere solo en palabras injuriosas, con la debida informacion sobre el hecho, se remita preso el reo á disposicion de su juez, debiendo, no obstante, permanecer en prision hasta que el Rey determine lo que se haya de hacer despues de haberle dado cuenta, si las palabras injuriosas fuesen muy calificadas: y que los comendadores ó caballeros, que desempeñaran oficios ó cargos públicos, en lo concerniente á estos, ya como demandantes, ya como demandados, sean juzgados por la justicia Real ordinaria. Asimismo, que las penas y calumnias, impuestas á los comendadores y caballeros, pertenecieran á la Orden de Santiago, y los bienes confiscados á los mismos, á la Real Cámara: que los familiares de la dicha Orden y personas de ella, estén en todo sujetos á la justicia Real: y por último, se reservó el Rey declarar é interpretar lo que deba hacerse en los casos que se ofrecieren, y no estuvieren previstos en la citada concordia.

Contra ella protestó el capítulo de Santiago, reunido en la iglesia parroquial de Santa María de esta córte, segun consta del acta, levantada en 5 de Junio de 1575. El Rey, en vista de esta protesta, dispuso que se remitiera el espediente al Consejo de Castilla, con todas las bulas pontificias, referentes al particular; y despues á una junta especial, que nombró, á fin de que, examinando todos los antecedentes, propusiera lo que creyera mas justo y conveniente.

En esta concordia, cuya fecha es solo posterior cuatro años al Breve de incorporacion perpétua á la Corona de los Maestrazgos de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, quedó fijada, en lo esencial, la competencia del Consejo en los asuntos civiles y criminales; pero, en virtud de la reserva consignada en la parte final de la misma, fueron varias las disposiciones posteriores, que la aclararon ó modificaron, especialmente en lo que respecta á las atribuciones en materia criminal, de las que mencionaremos las principales. Consultado el Consejo por el señor D. Felipe V, sobre si las justicias ordinarias podian conocer de las causas criminales de los caballeros de las Ordenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava, siendo de las comprendidas en la concordia del conde de Osorno, ó si tocaba su conocimiento al Consejo de las Ordenes ó juntas de comisiones; fué de dictámen que podia S. M. nombrar cuatro caballeros profesos de las tres Ordenes, para que conociesen de dichas causas:

y para el grado de suplicacion, otros dos mas, quienes habian de consultarlo todo con el Soberano: que de este modo se cumplia con la mente de los Breves, que solo pedian dos instancias y la última decision de la Real Persona, y no se podria apelar á la Santa Sede, mayormente cuando siempre que la jurisdiccion eclesiástica estaba aneja á alguna Corona Real, si el Rey conocia personalmente, ó se le consultaba la sentencia, no solia Su Santidad admitir las apelaciones por tener la mayor confianza en su justicia. S. M. se conformó con este parecer; y con el de algunos votos particulares, en cuanto á la incapacidad de conocer los jueces seculares de las causas criminales y mistas de los caballeros de las Ordenes militares, que únicamente podian ser castigados por jueces de su órden.

En su virtud se publicó en 17 de Abril de 1707, el auto acordado, que es la ley 10, título 8.°, lib. 2.°, Nov. Rec. En otro de 19 de Octubre de 1714, que es la ley 12 del mismo título y libro, se dijo que para remover de una vez los motivos de controversias, y que cada Consejo, tribunal y Chancillería ejerciera sin embarazo la jurisdiccion, que á cada uno competia, y S. M. le tenia comunicada, se habia mandado prevenir al Consejo de Ordenes, por Real resolucion á sus consultas de 12 de Abril y 13 de Setiembre del mismo año, que sabia y debia tener presente, que su jurisdiccion es limitada á las materias eclesiásticas y temporales, que tocaban á las Ordenes militares, y que la jurisdiccion ordinaria, que tenia y ejercia en los territorios de las mismas Ordenes, estaba sujeta al Consejo Real, Chancillerías y demás tribunales Reales; y que si se habia tolerado que tambien los recursos ó apelaciones vinieran á aquel Consejo, era por gracia, no de justicia, como que esto habia sido á prevencion: que igualmente sabia aquel Consejo que los mismos caballeros de las Ordenes, en las causas civiles, habian estado y estaban sujetos á la jurisdiccion Real ordinaria, y en las criminales, en muchos casos, especialmente en los que no delinquian como tales caballeros de Orden, sino como otro cualquiera: siendo cierto que, cuanto en esto se le habia permitido al Consejo de las Ordenes, no era en fuerza de las bulas; pues como les constaba, ni los señores Reyes Católicos, ni otro alguno de los predecesores de S. M., las admitieron, ni toleraron su práctica; sino que esto habia sido por voluntad de los mismos señores Reyes, lo que no solo habia conservado S. M., pero habia ampliado con nuevos decretos y declaraciones, que jamás aquel Consejo habia tenido, ni podido lograr. Pero que viéndole ahora tan empeñado en querer quitar y desnudar á los Reales Consejos y Chancillerías de la jurisdiccion que les habia quedado y competia, habia parecido á S. M. prevenirle de ello, para que se contuviera en los términos de la suya, y advirtiera que su deseo se observase y practicase en todo lo que se observó y practicó desde que las Ordenes entraron en la Corona, hasta la muerte del señor Felipe IV, su bisabuelo, que eran las reglas mas seguras y sólidas, en que se afianzaba el acierto de aquel y los demas tribunales; y que el Consejo, en inteligencia de esta deliberacion, se arreglara á ella y diera las órdenes convenientes á la sala y Chancillerías para que la observasen y guardasen en lo que les tocaba: habiéndose mandado prevenir de ello á los Consejos de Guerra, Indias y Hacienda.

Esta ley se mandó observar por la Real cédula de 23 de Agosto de 1793, sobre decisiones de justicia en el territorio de las Ordenes, inserta en la ley 17 del tít. 4.°, lib. 7.°, Nov. Recop. Y en la ley 9.°, tít. 3.°, lib. 6.° del mismo código, dice el Rey D. Felipe V, que usando de sus facultades, habia resuelto avocar á su persona las causas criminales, que ocurrieren de los militares caballeros de Orden; pero con separacion de ellas, distinto respeto y diverso fin: de suerte que las causas criminales, que por la concordia de 23 de Agosto de 1527, comunmente llamada del conde de Osorno, se hallaban esceptuadas de la jurisdiccion del Consejo de Ordenes, ó que conocia de ellas á prevencion, deberian entenderse avocadas en fuerza de la Real preeminencia y superior jurisdiccion del Monarca, á fin de remitir su conocimiento y decision al tribunal, junta ó ministro que fuere de su satisfaccion, porque, conociéndose de

estas causas en virtud de la Real jurisdiccion, le era facultativo ampliarla ó restrinjirla, y conferirla á quien le pareciere; pero que las causas, que por la misma concordia se estimó tocar su conocimiento al Consejo de las Ordenes, debia entenderse las avocaba, usando de la facultad de Maestre y administrador perpétuo de las Ordenes, para resolverlas por sí mismo, prévio informe de la persona de letras, á quien le pareciere remitirlas.

Así corrieron las cosas, hasta que en el Real decreto de 30 de Julio de 1836, que hemos citado, se dispuso con respecto á sus atribuciones: 1.° que el Consejo de las Ordenes se limitara, en lo sucesivo, á conocer de los negocios religiosos de las cuatro Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, ejerciendo la jurisdiccion eclesiástica, como hasta entonces, conforme á las reglas prescritas por las bulas pontificias, y observando el reglamento, las disposiciones y prácticas vigentes en la actualidad: 2.° que se suprimiera el juzgado de iglesias, cuya jurisdiccion debia reasumir el Consejo, como antes de la creacion de aquel, conociendo tambien de los negocios gubernativos de las mismas iglesias, haciendo instruir por su secretaría los oportunos espedientes: 3.° que los fondos de toda especie, pertenecientes al Consejo, cualquiera que fuese su denominacion y orígen, se recaudasen por la Real Hacienda, rindiéndose las debidas cuentas por quien correspondiera; y que á su consecuencia se suprimiera la superintendencia de los tesoros de las Ordenes, la tesorería y la contaduría de encomiendas; y 4.° que se suprimiera la Real junta apostólica.

Por Real órden de 1.° de Noviembre de 1837, se dispuso aun, que la jurisdiccion privativa de maestrazgos y encomiendas debia continuar subsistente, por lo tocante á las cosas, debiendo cesar el fuero privilegiado de las personas.

Ya hemos hecho notar que, no obstante la alteracion, hecha por el decreto de 1836 en la organizacion y atribuciones del Consejo de las Ordenes, quedó funcionando con la misma denominacion, hasta que de Real órden se le cambió, dándole el de *Tribunal especial*, con el cual ha seguido, hasta que, por decreto del Gobierno provisional, de 2 de Noviembre de 1868, se refundió en el Supremo de Justicia, disponiéndose que dos ministros de aquel pasaran á formar parte de éste, los cuales, auxiliados por el teniente fiscal y subalternos que se designasen, ejercieran la jurisdiccion eclesiástica gubernativa y contenciosa, y cuantas facultades hasta entonces habia ejercido, con arreglo á bulas pontificias y leyes del reino, el Tribunal especial de las Ordenes.

Y por otro decreto de 26 del propio mes de Noviembre de 1868, que reformó la organizacion del Tribunal Supremo de Justicia, se dispuso (art. 4.°) que «en los negocios de la jurisdiccion eclesiástica, que antes eran de la competencia del Tribunal especial de las Ordenes militares, entenderán los dos ministros, á quienes corresponde su conocimiento, con arreglo al espresado decreto de 2 de este mes. En los casos de discordia, y siempre que fuere necesario, el presidente del Tribunal nombrará el ministro ó ministros que deban concurrir para dirimir aquella, ó conocer del asunto, entre los que sean del Tribunal Supremo y tengan aptitud legal para ejercer la espresada jurisdiccion, y los que la hayan ejercido anteriormente.» Y por el art. 6.° se declaró además, que corresponde á los ministros que ejerzan la jurisdiccion eclesiástica de las Ordenes militares, el conocimiento de los negocios que son de su competencia, arreglándose en sus procedimientos á las disposiciones que regian en el Tribunal especial de las mismas Ordenes.

CONSEJO PATERNO. El que alguna vez, segun nuestras leyes, deben pedir los hijos al padre para contraer matrimonio; y á su vez á las personas que al efecto, y en un caso deficiente, sustituyen al padre.

Nuestras leyes hablan á veces promiscuamente de *consejo*, *licencia*, *bendicion* paterna y *consentimiento paterno*, espresando, ó para espresar por cada una de dichas enunciaciones, este último concepto, como todo puede verse en la célebre pragmática de 1776. Y ciertamente que cualquiera de ellas encierra como esencia el consentimiento.

Pero además, la mencionada pragmática

hace especificamente necesario el pedir en un caso dado el *consejo*, en cuya razon espresa en su párrafo 6.°: «Los mayores de 25 años *cumplen con pedir el consejo paterno*, para colocarse en estado de matrimonio, que en aquella edad no admite dilacion, como está prevenido en otras leyes; pero si contravinieren, dejando *de pedir* el consejo paterno, incurrirán en las mismas penas que quedan establecidas, así en cuanto á los bienes libres, como en los vinculados.» (Ley 9.ª, tít. 2.°, libro 10, Nov.)

No puede ser mas notable la diferencia esencial entre consejo y consentimiento paterno: el consejo basta pedirlo; el consentimiento era necesario obtenerlo bajo las penas de la ley. La pragmática no establecia forma para esta peticion y el modo de acreditarla, como veremos lo verificó una ley posterior.

La pragmática, célebre tambien, de 1803 (ley 18, título y libro citados) modificó notablemente la de 1776; y en este punto ordenó: «Los hijos, que hayan cumplido 25 años, y las hijas que hayan cumplido 23, podrán casarse á su arbitrio, sin necesidad de pedir ni obtener *consejo*, ni *consentimiento* de su padre: en defecto de éste, tendrá la misma autoridad la madre; pero en este caso los hijos y las hijas adquirirán la libertad de casarse á su arbitrio, un año antes, esto es, los varones á los 24 y las hembras á los 22, todos cumplidos: á falta de padre y madre, tendrá la misma autoridad el abuelo paterno, y el materno, á falta de éste; pero los menores adquirirán la facultad de casarse á su arbitrio dos años antes que los que tengan padres, esto es, los varones á los 23 y las hembras á los 21, todos cumplidos: á falta de los padres y abuelos paterno y materno, sucederán los tutores en la autoridad de resistir los matrimonios de los menores, y á falta de los tutores, el juez del domicilio, todos sin obligacion de esplicar la causa; pero en este caso, adquirirán la libertad de casarse á su arbitrio, los varones á los 22 años y las hembras á los 20, todos cumplidos.»

Despues, la ley de 20 de Junio de 1862, diferenciando del modo que veremos, y como antes no se habia hecho, entre el *consentimiento* y el *consejo* paterno, en razon de este último, ordenó:

«Art. 1.° El hijo de familia, que no ha cumplido 23 años, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del consentimiento paterno.

»Art. 2.° En el caso del artículo anterior, si falta el padre, ó se halla impedido para prestar el consentimiento, corresponde la misma facultad á la madre, y sucesivamente en iguales circunstancias, al abuelo paterno y al materno.....

»Art. 15. Los hijos legítimos, mayores de 23 años, y las hijas mayores de 20, pedirán *consejo* para contraer matrimonio á sus padres ó abuelos, por el órden prefijado en los artículos 1.° y 2.° Si no fuere el consejo favorable, no podrán casarse hasta despues de trascurridos tres meses desde la fecha en que le pidieron. La peticion del consejo se acreditará por declaracion del que hubiere de prestarlo, ante notario público ó eclesiástico, ó bien ante juez de paz, prévio requerimiento y en comparecencia personal. Los hijos que contraviniesen á las disposiciones del presente artículo, incurrirán en la pena marcada en el 483 del Código penal, y el párroco que autorizare tal matrimonio, en la de arresto mayor.»

Ampliando aun mas las formas para acreditar legalmente el haberse pedido, y concedido, ó negádose el *consejo*, fué preciso dictar algunas resoluciones, de las que las principales son las siguientes:

«1.° Cuando el consentimiento ó consejo, favorable ó adverso, de los padres y demas personas que deben prestarlo para la celebracion de matrimonios, con arreglo á la ley, se dé en diligencias judiciales, deberá usarse en ellas del papel del sello de 60 céntimos de escudo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 27 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861.

»2.° Cuando se consigne dicho consentimiento ó consejo en escritura pública, se usará en su copia del sello 5.°, de precio 3 escudos 20 cénts., al tenor del art. 9.° del propio real decreto.

»3.° Cuando lo sea por medio de acta no-

tarial, esta habrá de estenderse en papel del sello 9.°, ó sea de 20 cénts. de escudo, en armonía con lo mandado en el párrafo 1.°, artículo 13 del antes citado real decreto, y por el art. 101 del reglamento general de 30 de Diciembre de 1862 para el cumplimiento de la ley de 28 de Mayo del citado año, sobre la constitucion del notariado; pero se empleará el sello 8.° de precio de 40 cénts. de escudo en los testimonios, que de las actas de que trata la regla anterior, libren los notarios autorizantes de las mismas, como caso comprendido en la regla 1.ª del art. 12 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861. (Real órden de 6 de Junio de 1867).

Todavía algunos párrocos y jueces eclesiásticos, no obstante los términos esplícitos de la ley sobre el valor legal de las evasivas ó negativas del padre á dar el consejo pedido, entendian que dichas evasivas bastaban para impedir el matrimonio; y elevada sobre ello queja al Gobierno, por resolucion de 16 de Diciembre de 1863, se declaró, que, conforme á la ley del caso, el hijo cumple con pedir el consejo, y que, «en todos los casos se entienda que la obligacion del hijo á pedir el consejo paterno, está cumplida con requerirlo y acreditarlo, en los términos que previene el art. 15 de la ley, sin que jamás las evasivas del padre puedan producir otro efecto que el de una negativa.»

Ultimamente, en virtud de representacion de varios visitadores del papel sellado, que pretendian se declarase la responsabilidad de los notarios que no habian empleado el papel del sello correspondiente para acreditar la peticion y negativa del consejo, al tenor del citado Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, se declaró, por órden del Gobierno provisional, de 16 de Febrero de 1869, que siendo anterior dicho decreto á la ley de 1862, no pudo establecer regla cierta y obligatoria de lo que habria de practicarse en aplicacion de una ley que aun no existia, y que el caso consultado por los obispos de Urgel y de Málaga, y la reclamacion de los visitadores, se tenga por resuelto en las prescripciones de la Real órden de 6 de Junio de 1867, recordándose esta para que sirva de gobierno á todos los funcionarios y particulares, que hayan de entender en el asunto de que se trata.

En tal estado de cosas se publicó por ley la institucion del matrimonio civil. Véase su artículo, y **CONSENTIMIENTO PATERNO**.

CONSEJO DE PORTUGAL. Unido á la Corona de Castilla el reino de Portugal, por el Rey Felipe II, en 1580, el mismo Monarca creó el Consejo de Portugal, en 1582. Felipe III lo suprimió en 7 de Junio de 1611, sustituyéndolo con una junta de gobierno. En 27 de Noviembre de 1658 Felipe IV restableció el Consejo. Componíase de seis consejeros y dos secretarios. Debia celebrar sus sesiones en el mismo Palacio Real, como otros consejos. Procuró dársele consideracion y prestigio, pero luego se estinguió.

CONSEJOS PROVINCIALES. La institucion de estas corporaciones tuvo orígen en Francia, por el decreto de la Asamblea de 22 de Diciembre de 1789, desenvuelto en la instruccion de 8 de Enero de 1790. Por estas disposiciones la administracion de los departamentos se dividió en dos secciones, de las cuales la primera llevaba el nombre de *Consejo del departamento*, y la segunda el de *Directorio del departamento*.

Estableciéronse en España por su ley orgánica de 2 de Abril de 1845, que determinó sus caracteres principales, y fueron fijándose y desenvolviéndose sus atribuciones por disposiciones posteriores, siendo las fundamentales, sobre la citada ley de 2 de Abril, la Real órden de 2 de Julio siguiente y el Reglamento de 1.° de Octubre del propio año de 1845, sobre procedimiento en lo contencioso-administrativo.

Como estas corporaciones responden á un sistema determinado de gobierno y administracion de las provincias, han sufrido las vicisitudes de nuestros cambios políticos. En 1854 fueron suprimidas por Real decreto de 7 de Agosto, mandándose á la vez, que las funciones que desempeñaban los Consejos provinciales, pasaran á las autoridades, corporaciones administrativas, tribunales y juzgados á que correspondian al publicarse la ley de 2 de Abril de 1845; y que los asuntos contencioso-administrativos pendientes, y los

que ocurrieran hasta que se publicase la ley que arreglaria esta especie de jurisdiccion, se siguiesen en las diputaciones provinciales, por los mismos trámites y reglas que se observaban en los referidos consejos.

Pasó aquella situacion, sin que llegara á publicarse la ley que habia de arreglar la jurisdiccion contencioso-administrativa, y por Real decreto de 16 de Octubre de 1836, fueron restablecidos los Consejos provinciales, con su ley orgánica de 2 de Abril de 1845, el reglamento de 1.° de Octubre siguiente y las demás disposiciones, que determinaban la organizacion y atribuciones de los mismos, de suerte que volvieron á funcionar en igual forma que antes de su supresion.

En 25 de Setiembre de 1863 se sancionó una nueva ley para el gobierno y administracion de las provincias, y en ella fueron comprendidos los Consejos provinciales, determinando su organizacion y atribuciones, en forma análoga á las que se les dió en 1845, con las ligeras modificaciones que luego indicaremos. A la vez, y con la propia fecha, se publicó un reglamento para la ejecucion de dicha ley.

Esta ley y su reglamento fueron reformados; aquella, por Real decreto de 21 de Octubre de 1866, al que se dió fuerza de ley por la de 17 de Mayo de 1867; y este, por Real órden de 22 del mismo Octubre: reformas hechas con el objeto de dar mas fuerza á la autoridad suprema del Gobierno, y de restablecer con vigor los elementos esenciales del poder, segun se espresó en la esposicion que precede á dicho decreto. Estas reformas afectaron, por consiguiente, á la organizacion de los Consejos provinciales; aunque sin alterar sus atribuciones.

Y últimamente fueron suprimidos por decreto, que en 13 de Octubre de 1868 dictó el Gobierno provisional, creado por la revolucion de Setiembre, ordenándose á la vez que los negocios contencioso-administrativos, que eran de la competencia de los consejos provinciales, pasaran á las Audiencias. Y por otro decreto de 26 de Noviembre del propio año, se dispuso que dichos negocios fuesen de la competencia de la sala primera de la Audiencia del territorio á que correspondiera la provincia en que debian comenzarse, arreglándose en sus procedimientos al reglamento y demás disposiciones que regian en los Consejos provinciales; y que los recursos de nulidad y apelacion que antes iban al Consejo Real, luego al de Estado, se interpongan para ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Hecha esta breve reseña de las vicisitudes que en su existencia han sufrido los Consejos provinciales, debemos indicar tambien cuáles fueron su organizacion y atribuciones. Aunque hoy no existan estos cuerpos, podrán ser restablecidos, como ya lo fueron en 1836, por formar parte de un sistema de buen gobierno de las provincias; y de todos modos el método de nuestra Enciclopedia exije que hagamos esta reseña, la cual, no solo es de interés histórico, sino tambien de utilidad práctica en el dia, mediante á que, segun se ha dicho, ha sido conferida á las Audiencias la jurisdiccion contencioso-administrativa de los Consejos provinciales, con la misma estension y sobre los propios asuntos que estos la ejercian. Interesa, por tanto, conocer cuáles fueron sus atribuciones sobre este punto.

Organizacion. En cada provincia habia un Consejo, y de aquí su denominacion de *provincial*, con residencia precisa en la capital de la misma provincia. Segun la ley orgánica de 2 de Abril de 1845 (arts. 1.° á 5.°), se componia del jefe político, que era el presidente, y de tres á cinco vocales, nombrados por el Rey, de los cuales, dos al menos, habian de ser letrados. Uno de los vocales era vice-presidente, por nombramiento tambien del Gobierno. Estos cargos eran retribuidos de fondos provinciales, con una gratificacion de ocho á doce mil reales al año, y los servicios en ellos prestados debian estimarse como mérito especial para las carreras respectivas de los consejeros.

Para reemplazar á estos en ausencias, enfermedades, recusaciones y separaciones, podian nombrarse hasta un número igual de supernumerarios, los cuales tenian facultad de asistir á las sesiones, pero sin voz ni voto, escepto cuando entraban en ejercicio, para

lo cual eran designados por el jefe político.

Los Consejos tenian el tratamiento impersonal. Los consejeros ocupaban sus asientos por el órden de antigüedad, y en igualdad de fechas por la edad; pero precedia á todos el vice-presidente (reglamento de 1.° de Octubre de 1845, arts. 3.° y 17).

Debian celebrar las sesiones que, á juicio del jefe político, fuesen necesarias para el despacho de los negocios. Estas sesiones eran á puerta cerrada. Cuando actuaba el Consejo como tribunal, debia ser pública la vista del proceso (arts. 12 y 13 de la ley).

Para tomar acuerdo en los negocios contencioso-administrativos se requeria la asistencia de tres vocales, uno de los cuales habia de ser letrado. En caso de empate, era decisivo el voto del presidente. Uno de los vocales hacia de ponente en cada negocio por eleccion del mismo Consejo, sin que pudiera escusarse por haber desempeñado este cargo en otros negocios (artículos 14 de la ley y 1.° y 2.° del reglamento).

Todos los vocales, escepto el jefe político, podian ser recusados por parentesco hasta el cuarto grado civil con las partes; por enemistad deducida de haber seguido pleito ó causa criminal con los interesados y sus consanguíneos ó afines en línea recta, ó por interés en el negocio (art. 13 del reglamento).

Para el despacho de los negocios habia un secretario, cuyo cargo desempeñaba un oficial del gobierno político, designado por el jefe, procurando que fuera letrado. No llevaba derechos á las partes (id. art. 5.° y 7.°).

Habia tambien dos ugieres, cuyo nombramiento correspondia al jefe político. Tampoco cobraban derechos, á no ser que saliesen de la capital para evacuar diligencias judiciales, en cuyo caso se les abonaban las dietas que fijaba el jefe político oido el Consejo. Cobraban sueldo del presupuesto provincial (id. artículos 9.° á 12).

En los Consejos provinciales no era obligatorio el ministerio de abogados ni procuradores (id. art. 8.°).

Tal era la organizacion que se dió á los Consejos provinciales por la ley que los creó, y por su reglamento de 1845. La de 25 de Setiembre de 1863 les conservó la misma organizacion, aunque con algunas modificaciones. La mas importante de estas fué la de dar intervencion á las diputaciones provinciales en los nombramientos de consejeros de número y supernumerarios, secretario y demás empleados. Estos nombramientos debian hacerse de Real órden; pero á propuesta en terna de la diputacion provincial, á la cual se confirió además la facultad de nombrar todos los empleados de la misma y del consejo, cuyo sueldo no escediese de 6,000 rs.; y el propio secretario de la diputacion, que debia ser letrado, lo era á la vez del consejo (artículos 3.°, 47, 55 y 65 de dicha ley). Mas, esa intervencion de las diputaciones fué suprimida por el Real decreto de 21 de Octubre de 1866, que fué el objeto principal de la reforma, restituyendo á la Corona la libre eleccion de dichos funcionarios, aunque dentro de las categorías establecidas, y dando á los Consejos provinciales un secretario especial, que habia de ser licenciado en leyes ó en administracion, ó abogado.

Por estas disposiciones se conservó el número de tres á cinco vocales en los Consejos, é igual número de supernumerarios; pero fijándose el de tres para las provincias que no llegasen á 300,000 almas, y el de cinco para las demás, aunque facultando al Gobierno para reducirlos á tres en estas, y aumentarlos á cinco en aquellas (art. 63 y 65 de la citada ley).

Cuando el gobernador de la provincia lo consideraba oportuno, ó el Consejo lo reclamaba por exigirlo la índole de los negocios, podian asistir á las sesiones, pero sin voto, el secretario del gobierno, los jefes de Hacienda, el de la seccion de Fomento, los ingenieros de caminos, minas y montes y el arquitecto provincial (art. 64, de id.).

Un consejero, nombrado por el Gobierno, ejercia las funciones de presidente del Consejo. Sin embargo, podia presidirlo el gobernador de la provincia, siempre que lo tenia por conveniente. A falta de presidente, desempeñaba sus funciones el consejero mas antiguo, y si los nombramientos eran de la misma fecha, el de mas edad (art. 66 de id.).

Se fijó en 14,000 rs. la gratificacion de los consejeros de número de Madrid, y en 12,000 reales para las demás provincias, tanto de primera como de segunda clase; y la de los secretarios en 14,000, 12,000 y 10,000 rs. respectivamente; pagados de fondos provinciales, como los demás empleados de los Consejos (arts. 74, 75 y 76 de id.).

Se confirmó el tratamiento impersonal á estos Consejos, y se dió el de *señoría* á los consejeros, mientras lo fuesen (art. 68, id.).

La mayoría de los consejeros provinciales efectivos, y la de supernumerarios, habia de componerse precisamente de letrados; y se declaró que estos cargos eran incompatibles con cualquiera otro empleo público en activo servicio; que no podrian ser elegidos individuos de ayuntamiento ni diputados á Córtes en la misma provincia, y que los servicios prestados en ellos serian de abono para cesantía ó jubilacion (art. 70, 71, 72 y 74, id.).

Los consejeros no podian desempeñar su cargo sin prestar antes el correspondiente juramento en manos del gobernador. Tenian que fijar su residencia en la capital de la provincia, y no podian ausentarse sin licencia, la que podia conceder el gobernador siempre que no pasase de 15 dias y para dentro de la provincia, y en los demás casos el Gobierno (arts. 147 y 148 del reglamento de 1863).

En la ley, ni en el reglamento de 1845, no se determinaron las cualidades necesarias para ser consejero provincial, ni los casos de incapacidad. La de 1863 suplió estas omisiones disponiendo que, para ser consejero provincial de número ó supernumerario, se necesitaba ser español, tener 30 años de edad y alguna de las circunstancias siguientes: pagar en la provincia 800 rs. de contribucion territorial desde 1.° de Enero del año anterior; ser abogado con cuatro años de estudio abierto y pagar en este concepto una cantidad superior á la cuota media que se satisfaga en el colegio á que corresponda, ó 400 rs. por contribucion territorial; haber servido cuatro años en la carrera judicial ó fiscal, ó en la administrativa con título de licenciado en leyes ó administracion y 12,000 rs. de sueldo; ó seis años en cualquier cargo público con 16,000 rs. de sueldo, ó en plaza de secretario de consejo provincial, ó de aspirante del de Estado ganada por oposicion; ó haber sido consejero provincial por dos años, ó diputado provincial (art. 69 de id.).

Y segun el art. 75 de la misma ley de 1863, no podian ser consejeros provinciales, los arrendatarios de arbitrios provinciales ó municipales, ni sus fiadores; los contratistas de obras públicas provinciales ó municipales, ni sus fiadores; los deudores á fondos públicos como segundos contribuyentes; los recaudadores de contribuciones, y los incapacitados legalmente para servir destinos públicos.

Con estas modificaciones y adiciones, quedó subsistente la organizacion dada á los Consejos provinciales por la ley de su creacion de 1845.

Atribuciones. Desde su orígen tuvieron los Consejos provinciales el doble carácter de cuerpos consultivos de los jefes políticos, despues gobernadores de las provincias, para auxiliarles, con su informe razonado, en la administracion y gobierno de las mismas; y de tribunales contencioso-administrativos de primera instancia.

Respecto del primer concepto, la ley orgánica de 2 de Abril de 1845 ordenó (arts. 6.° y 7.°) que, como *cuerpos consultivos*, darian su dictámen siempre que el jefe político por sí, ó por disposicion del Gobierno, se lo pidiera; ó cuando las leyes, reales órdenes y reglamentos lo prescribiesen; y que tendrian además en los diferentes ramos de la administracion la participacion que las leyes especiales de los mismos, reales órdenes y reglamentos les señalaran. Con esta generalidad determinó dicha ley las atribuciones consultivas de los Consejos provinciales. Y no podia ser otra cosa, por entonces, si se tiene en cuenta que, á la vez que se creaba esta institucion, se daba por otras leyes nueva organizacion á la administracion y gobierno de las provincias y de los municipios. Era preciso, por tanto, consultar estas leyes y las demás disposiciones del caso para determinar si habia de ser oido ó consultado el Consejo provincial.

La ley de 8 de Enero de 1845 sobre diputaciones provinciales, exigia esta consulta, para resolver sobre las reclamaciones contra la eleccion de diputados provinciales: la de ayuntamientos de la misma fecha la ordenaba tambien en lo relativo á las elecciones de concejales, suspension de los acuerdos de estas corporaciones, aprobacion de sus cuentas, y otros particulares: la ley electoral de 18 de Marzo de 1846, imponia al jefe político la obligacion de oir al Consejo provincial para resolver sobre las inclusiones y esclusiones de las listas de electores: sobre obras en los rios, uso y aprovechamiento de sus aguas, la Real órden de 14 de Marzo de 1846: sobre caminos vecinales, el Real decreto de 7 de Abril de 1848: sobre clasificacion de establecimientos provinciales de beneficencia y direccion de sus pleitos, las Reales órdenes de 22 de Octubre de 1846 y 18 de Diciembre de 1848: sobre conflictos de jurisdiccion ó competencia entre las autoridades administrativas y judiciales, el Real decreto de 4 de Junio de 1847: sobre ciertas cuestiones relativas á minas, la ley de 11 de Abril de 1847: sobre los ramos de correos, caminos, canales y puertos, el Real decreto de 23 de Setiembre de 1846; y á este tenor era indispensable consultar otras muchas disposiciones.

Con el objeto, sin duda, de evitar la incertidumbre y demás inconvenientes á que daba lugar este sistema, la ley de 25 de Setiembre de 1863, resumiendo las disposiciones anteriores, determinó espresamente los casos en que debian ser consultadas estas corporaciones, ya necesariamente, ya á voluntad del gobernador de la provincia. Estos casos se hallan espresados en los arts. 77 y 78 de dicha ley, que, sin alteracion, ocupan los núms. 76 y 77 en la nueva edicion que de ella se hizo, en virtud de la reforma decretada en 1866. Dicen así:

«Art. 77. Los Consejos provinciales serán siempre consultados:

1.° Sobre la concesion ó negativa de la autorizacion para procesar á los empleados y corporaciones de la administracion de la provincia.

2.° Sobre las providencias declarando la competencia ó incompetencia en los conflictos de jurisdiccion y atribuciones entre la administracion y los tribunales.

3.° Sobre las autorizaciones que soliciten los ayuntamientos para adquirir ó enajenar bienes muebles ó inmuebles, redimir censos, levantar empréstitos, hacer transacciones de cualquiera clase, aceptar donaciones ó legados que se hicieren al comun ó á algun establecimiento municipal, y entablar ó sostener litigios en nombre del municipio.

4.° Sobre nulidad de las reuniones y de los acuerdos de los ayuntamientos.

5.° Sobre validez ó nulidad de las elecciones municipales, y sobre la aptitud legal para ejercer los cargos de individuos de ayuntamiento.

6.° Sobre la aprobacion de los presupuestos municipales que escedan de 100,000 reales.

7.° Sobre la imposicion de servidumbres temporales que exijan las obras públicas, provinciales ó municipales.

8.° Sobre la necesidad de ocupar temporalmente las fincas, ó aprovechar los materiales contiguos á una obra de utilidad pública, cuando los propietarios no se conformen con el parecer del ingeniero.

9.° Sobre la declaracion de utilidad pública de una obra, y expropiaciones forzosas á que diere lugar.

10. Sobre conceder ó negar autorizacion para nuevos riegos, y demás obras que la necesiten en el cáuce ó márgen de los rios.

11. Sobre el establecimiento de fábricas, talleres ú oficios insalubres y peligrosos, en los casos que determinen los reglamentos.

12. Sobre los negocios para los cuales sea legalmente necesario el voto ó informe de la diputacion provincial, siempre que por la urgencia ó naturaleza del asunto no pueda esperarse á la reunion de esta, debiendo asistir en tales casos los diputados provinciales que se hallen en la capital. La diputacion en su primera reunion acordará lo que estime para que recaiga en el espediente la resolucion definitiva.

13. Sobre todos aquellos asuntos en que por leyes anteriores deban ser oidas las di-

putaciones provinciales, no hallándose confirmado este requisito en la presente ley.

14. En todos los demas casos que determinen las leyes y reglamentos.

»Art. 78. Los consejos informarán ademas sobre todos los negocios en que el gobernador les consulte.»

Además de las atribuciones consultivas, que quedan enumeradas, las tenian tambien los Consejos provinciales para decidir, en la via gubernativa, sobre las reclamaciones interpuestas ante ellos, con arreglo á lo prevenido en la ley de reemplazo del ejército, y para aprobar definitivamente las cuentas municipales, cuyos presupuestos hubiesen sido aprobados por el gobernador de la provincia. Debian fallar estos últimos espedientes dentro de un año, con apelacion para ante el Tribunal de cuentas del Reino (arts. 80 y 81 de la ley de 1863).

Para el despacho de todos estos negocios, debian celebrar los Consejos provinciales, á puerta cerrada, las sesiones que fuesen precisas. Para tomar acuerdo, habian de estar presentes tres consejeros, entre ellos uno letrado por lo menos. En caso de empate, el voto del presidente era decisivo (arts. 87, 88 y 89 de id.).

Les era obligatorio citar en sus informes las leyes, disposiciones y precedentes en que fundasen su opinion, así como las razones que la abonaran, resumiendo siempre aquella con claridad y precision en una ó mas conclusiones. Hallándose presente el gobernador, podian dar su dictámen verbalmente, cuando la naturaleza del negocio lo permitiera, en cuyo caso se tomaba en el registro, que debia llevarse al efecto, una breve razon de lo acordado (arts. 153 y 155 del reglamento de 1863).

Como *tribunales contencioso-administrativos*, tenian tambien determinadas por la ley sus atribuciones. La de 2 de Abril de 1845, despues de enumerar algunas de ellas en el artículo 8.°, dispuso por el 9.° que entenderian tambien los Consejos provinciales en todo lo contencioso de los diferentes ramos de la administracion civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgados especiales, y en todo aquello á que en lo sucesivo se estendiera la jurisdiccion de estas corporaciones. Como en lo gubernativo, habia necesidad de consultar en cada caso, en virtud de esta generalidad, las disposiciones relativas al mismo, para saber si procedia la via contenciosa.

La ley de 25 de Setiembre de 1863, enumeró todos los casos, que, segun las disposiciones, entonces vigentes, eran de la competencia de estos Consejos en el concepo antedicho, comprendiendo tambien en ellos los designados espresamente en la ley anterior. A este propósito, los arts. 82, 83 y 84 de dicha ley, que en la nueva edicion que de ella se hizo, en virtud de la reforma decretada en 1866, ocupan los números 81, 82 y 83, dicen así:

«Art. 82. Los Consejos actuarán además como tribunales contencioso-administrativos. En tal concepto oirán y fallarán las cuestiones de este órden que se susciten con motivo de las providencias dictadas por los gobernadores en la aplicacion de las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas.

»Art. 83. En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, los Consejos provinciales oirán y fallarán, cuando pasen á ser contenciosas, las cuestiones relativas:

1.° Al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.

2.° Al repartimiento y exaccion individual de toda especie de cargas generales, provinciales ó municipales.

3.° A la cuota con que corresponda contribuir á cada pueblo para los caminos, en cuya construccion ó conservacion se haya declarado interesados á dos ó mas.

4.° A la reparacion de los daños que causen las empresas de esplotacion en los caminos á que se refiere el párrafo anterior.

5.° A las intrusiones y usurpaciones en los caminos y vias públicas y servidumbres pecuarias de todas clases.

6.° Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas.

7.° Al deslinde de los términos correspondientes á pueblos y ayuntamientos, cuando

estas cuestiones procedan de una disposicion administrativa.

8.° Al curso, navegacion y flote de los rios y canales, obras hechas en sus cáuces y márgenes, y primera distribucion de sus aguas para riegos y otros usos.

9.° A la insalubridad, peligro ó incomodidad de las fábricas, talleres, máquinas ú oficios, y su remocion á otros puntos.

10. A la caducidad de las pertenencias de minas, escoriales y terreros.

11. A la demolicion y reparacion de edificios ruinosos, alineacion y altura de los que se construyan de nuevo, cuando la ley ó los reglamentos del ramo declaren procedente la vía contenciosa.

12. A la inclusion ó esclusion en las listas de electores y elegibles para ayuntamientos y sindicatos de riego.

13. A los agravios en la formacion definitiva del registro estadístico de fincas.

14. A la represion de las contravenciones á los reglamentos de caminos, navegacion y riego, construccion urbana ó rural, policía de tránsito, caza y pesca, montes y plantíos.

»Art. 84. Se atribuyen, por último, al conocimiento y fallo de los Consejos provinciales, llegado el caso del artículo anterior, las cuestiones relativas:

1.° Al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los contratos y remates celebrados con la Administracion provincial para toda especie de servicios y obras públicas del Estado, provinciales y municipales.

2.° Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos públicos, reservando las demás cuestiones de derecho civil á los tribunales competentes.

3.° A la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas celebradas por la administracion provincial de propiedades y derechos del Estado y actos posteriores que de aquellos se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto definitivamente en posesion de dichos bienes.

4.° A la indemnizacion, legitimidad de los títulos y liquidacion de los créditos de los partícipes legos en diezmos, con arreglo á lo que previene la ley de 20 de Marzo de 1846.»

Como, por regla general, no puede entablarse la vía contenciosa sin que preceda una resolucion gubernativa de la autoridad competente, que lastime derechos preexistentes de un particular ó corporacion, estaba tambien prevenido que no podria, como no puede hoy, entablarse ninguna demanda ante los Consejos provinciales sin que el gobernador hubiere dictado providencia resolutoria en el asunto, salvo cuando otra cosa determine una ley especial. Y todavía era preciso consultar al mismo gobernador si procedia ó no la vía contenciosa, el cual resolvia sobre este punto lo que estimaba conveniente, con recurso de alzada al Ministro del ramo (art. 91, 93 y 94 de dicha ley). Esta consulta al gobernador se halla hoy suprimida.

Cuando los Consejos actuaban como tribunal, era pública la vista del pleito; pero secretas las deliberaciones. Los acuerdos se tomaban por mayoría absoluta de votos, y los fallos habian de ser siempre motivados, requiriéndose precisamente la asistencia de tres consejeros, uno de ellos letrado. Para conocer y fallar en este concepto, no era obstáculo el que los mismos consejeros hubieran emitido su dictámen en la vía gubernativa (arts. 79, 90 y 95 de id.).

Las demandas debian presentarse ante el Consejo en el término improrogable de 30 dias, contados, respecto de los particulares y corporaciones, desde el dia siguiente al de la notificacion administrativa de la providencia reclamable; y respecto de la Administracion, dentro de un año desde la fecha de la comunicacion al interesado (art. 93 de id.).

El procedimiento se regia por el reglamento de 1.° de Octubre de 1845 (art. 158 del de 1863).

Los Consejos provinciales no podian reformar ninguno de sus fallos; pero sí interpretarlos á peticion de parte, cuando se suscitaban dudas sobre su inteligencia. Eran apelables para ante el Consejo Real, primero, y despues el de Estado, salvo en los litigios cuyo interés, pudiendo apreciarse, no llegaba á 2.000 rs., pues en estos no se daba el re-

curso de apelacion (arts. 97 y 98 de la ley citada).

Ya hemos indicado anteriormente que de todos los negocios contencioso-administrativos conocen hoy las salas primeras de las Audiencias territoriales, con apelacion para ante la sala cuarta del Tribunal Supremo, con el mismo procedimiento y con los propios términos que regian en los consejos provinciales. De todo esto se tratará con mas estension en su lugar correspondiente. Véase **CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.**

Estaba prohibido á los Consejos provinciales determinar por vía de regla general, pues sus facultades se limitaban á decidir en las cuestiones particulares sometidas á su fallo (ar. 85 de la ley citada de 1863).

Tampoco podian entender en la ejecucion de sus propios fallos, pues esta correspondia á los agentes de la Administracion. Cuando habia que proceder por remate ó venta de bienes, su ejecucion y la decision de las cuestiones que sobreviniesen, correspondia y corresponde á los tribunales ordinarios, fuera de los casos espresados en las leyes y reglamentos para la cobranza de las contribuciones (art. 96 de id).

No podian provocar ni sostener conflictos ó cuestiones de competencia, pues esta facultad estaba reservada esclusivamente á los gobernadores, con audiencia de los mismos Consejos.

Y por último, les estaba tambien prohibido apoyar ni elevar peticion alguna, de cualquier especie que fuese, al Gobierno ni á las Córtes; y tampoco podian publicar sus acuerdos sin permiso del gobernador de la provincia ó del Gobierno (art. 86 de id., y 11 de la de 1845).

CONSEJO REAL. En los artículos anteriores hemos indicado que todos los Consejos supremos en España, sobre su denominacion específica, llevaban el prenotado, ó calificativo radical de *Real*, como *Real* Consejo de Castilla, *Real* Consejo de las Ordenes, *Real* Consejo de Indias, etc. Pero además llegó á existir un Consejo con la única denominacion de *Consejo Real*, y de este tratamos en el presente artículo.

Por la ley de 1.° de Enero de 1845 se autorizó al Gobierno para formalizar la organizacion administrativa de las provincias, y fué llevada á cabo, estableciendo por decretos con fuerza de ley la de ayuntamientos, gobiernos políticos, diputaciones provinciales y consejos provinciales. Por igual decreto con fuerza de ley de 6 de Julio del propio año de 1845, se estableció el *Consejo Real*, como cuerpo ó Consejo Supremo administrativo del Estado.

Compondríase de los Ministros secretarios de Estado y del despacho, de treinta consejeros ordinarios y de los estraordinarios, que el Rey autorizase en cada año para tomar parte en sus deliberaciones; del número de auxiliares que fueran necesarios, y de un secretario general, con los demás empleados y dependientes que determinasen los reglamentos.

La presidencia del Consejo se atribuia al presidente del de Ministros, y en su defecto, al Ministro de mas edad entre los que se hallasen presentes. Para el cargo de vice-presidente debia nombrar el Rey uno de los consejeros ordinarios. Tanto los consejeros ordinarios, como los estraordinarios, eran de nombramiento Real, á propuesta del Consejo de Ministros, y en decretos especiales, refrendados por el presidente del propio Consejo, debiendo guardarse para su separacion las mismas formalidades.

Para ser nombrado consejero ordinario era preciso haber cumplido la edad de 30 años y haberse distinguido notablemente por sus conocimientos y servicios en las diversas carreras del Estado, siendo incompatible este cargo con cualquiera otro empleo efectivo, debiendo recaer los nombramientos de los consejeros estraordinarios en los funcionarios siguientes: Presidentes, ministros y fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, del de Guerra y Marina, del Tribunal mayor de cuentas y del de la Rota de la Nunciatura: inspectores generales de todas las armas: subsecretarios de los ministerios: comisario general de Cruzada: directores generales de cualquier ramo de la administracion pública: intendente general del ejército: contadores generales: comisarios régios de los bancos de San Fernando y de Isabel II, y presidente y vocales de la Junta de direccion de la Arma-

da. Los consejeros estraordinarios no podian asistir al Consejo, ni tomar parte en sus resoluciones, sino en virtud de autorizacion del Rey, dada por punto general al principio de cada año; y los no comprendidos en esta autorizacion debian cesar de hecho de asistir á las sesiones. El número de los consejeros estraordinarios, autorizado en esta forma, no deberia esceder en ningun caso de las dos terceras partes de los ordinarios; y aquellos deberian entender solamente en los asuntos no contenciosos de la competencia del Consejo. A este debian ayudar en todos sus trabajos los auxiliares, de los cuales dos terceras partes habian de ser letrados.

Por lo que respecta á las atribuciones del Consejo, disponia la ley que debia ser siempre consultado sobre las instrucciones generales para el régimen de cualquier ramo de la administracion pública: sobre el pase y retencion de bulas, breves y rescriptos pontificios, y de las preces para obtenerlos: sobre los asuntos del Real Patronato y recursos de proteccion del Concilio de Trento: sobre la validez de las presas marítimas: sobre los asuntos contenciosos de la administracion: sobre las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y sobre las que se suscitasen entre las autoridades y agentes de la administracion; finalmente, sobre los demás asuntos que las leyes especiales, Reales decretos ó reglamentos sometieran á su exámen, debiendo dar además su dictámen siempre que los Ministros juzgasen conveniente oirle. Debia conocer de los asuntos administrativos de su competencia en Consejo pleno, ó por medio de las secciones, en que estaria dividido; y para que el Consejo pleno pudiera deliberar, se necesitaba la presencia de quince consejeros, sin contar en este número á los Ministros que asistieran.

Las secciones del Consejo serian análogas á los negocios correspondientes á los respectivos Ministerios; pero deberia haber además una especial, compuesta de cinco consejeros ordinarios, un fiscal y dos abogados fiscales, con el número de auxiliares letrados que los reglamentos determinasen, para instruir los espedientes y preparar las resoluciones del Consejo en los asuntos contenciosos.

Tales son las principales disposiciones de la ley de 6 de Julio de 1845. Mas como en ella se hubiera dejado para otras especiales el arreglo de varios puntos importantes, relativos al Consejo, y se considerara urgente completar la organizacion de este alto cuerpo administrativo, se publicó con este objeto el Real decreto de 22 de Setiembre del mismo año, por el cual se ordenaba, entre otras cosas, que el Consejo de Ministros propusiera al Rey, al principio de cada año, el estado de los consejeros estraordinarios que debian ser autorizados para tomar parte en las deliberaciones del Consejo; que los auxiliares de este fueran cuarenta, y de ellos veinticinco letrados, distribuidos entre las diferentes secciones del Consejo, y con voz consultiva en la respectiva seccion cuando discutiera los asuntos, que hubieren despachado; que el secretario general tuviere á su cargo todo lo concerniente al Consejo pleno y su organizacion, y que cada seccion tuviera un secretario particular.

Esto en cuanto á la planta general del Consejo; y en cuanto á sus atribuciones, se dispuso por el citado decreto que, además de los casos espresados en la ley, fuera consultado, por punto general: sobre los reglamentos generales para la ejecucion de las leyes; sobre los tratados de comercio y navegacion; sobre la naturalizacion de estranjeros; sobre conceder autorizacion á los pueblos y provincias para litigar, cuando esta clase de asuntos debieran ser decididos por el Gobierno; sobre los permisos que pidieran los pueblos ó provincias para enajenar ó cambiar sus bienes y para contratar empréstitos; y sobre las autorizaciones que con arreglo á las leyes debiera dar el Gobierno para encausar á los funcionarios públicos por escesos cometidos en el ejercicio de su autoridad.

Podria ser tambien consultado el Consejo cuando los Ministros estimasen conveniente oir su dictámen: sobre los proyectos de ley que hubieran de presentarse á las Córtes: sobre los tratados con las potencias estranjeras y concordatos con la Santa Sede; y sobre

cualquier punto grave que ocurriera en el gobierno y administracion del Estado. Se determinaba tambien cuáles eran los asuntos, cuyo conocimiento correspondia al Consejo pleno y eran, á saber: los proyectos de ley: las instrucciones y reglamentos generales: los tratados y concordatos: la resolucion final en los asuntos contenciosos: la validez de las presas marítimas: las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas: el pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios de interés general, y de las preces para obtenerlos: los asuntos graves del Real Patronato, y recursos de proteccion del Concilio de Trento; y los demás asuntos en que el Gobierno quisiera oir al Consejo pleno. Las secciones en que este habia de dividirse para los asuntos administrativos debian ser: de Estado, de Marina y Comercio, de Gracia y Justicia, de Guerra, de Gobernacion, de Hacienda y de Ultramar, presididas por el Ministro del ramo, y si concurriesen dos, por el de mas edad, debiendo tener además cada seccion un vice-presidente nombrado por el Rey, á propuesta del Ministro respectivo, de entre los vocales de la misma.

Las secciones debian instruir los espedientes relativos á los negocios de su competencia, y acordar el informe que hubieren de dar al Gobierno sobre los asuntos, en que fueren consultadas, como tambien instruir los espedientes y preparar el informe que hubieren de presentar al Consejo sobre los asuntos de que debiera conocer en pleno; siendo de la competencia esclusiva de la de Gracia y Justicia instruir además los espedientes y preparar la resolucion sobre la validez de las presas marítimas, y sobre las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, teniendo tambien á su cargo la coleccion y clasificacion de las leyes, decretos, Reales órdenes y reglamentos vigentes.

La seccion de Ultramar debia ser oida siempre en todos los asuntos relativos á aquellas provincias y á su régimen especial. La de lo contencioso debia conocer de los asuntos de la administracion, que tuvieran este carácter, y de las apelaciones de los Consejos provinciales. Siempre que la naturaleza de un asunto lo exigiere, podian reunirse para su despacho dos ó mas secciones.

El Consejo Real, segun se desprende de su organizacion y atribuciones, reunia dos calidades distintas: la de auxiliar del Gobierno supremo de la nacion, al que ilustraba con su autorizado dictámen en los múltiples negocios que abrazan los diferentes ramos de la administracion general del Estado, y la de tribunal *contencioso-administrativo*; pues aunque, ni en la ley de su creacion, ni en los decretos posteriores sobre su organizacion y competencia en el conocimiento de los asuntos contenciosos de la administracion, se le considerara ni calificara como tribunal, y con sólida razon, toda vez que sus consultas en lo contencioso solo adquirian fuerza de sentencias cuando eran aprobadas por un Real decreto; sin embargo, en el modo de conocer y proceder en dichos asuntos revestia las formas de un tribunal, y como tal entendia en ellos, ó en primera y única instancia, ó como tribunal de alzada ó apelacion. Como tribunal de primera y única instancia, era de su competencia conocer de las demandas contenciosas sobre el cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y contratos, celebrados directamente por el Gobierno, ó por las direcciones generales de los diferentes ramos de la administracion, como tambien de las demandas contenciosas, á que dieren lugar las resoluciones de los Ministros de S. M., cuando el Gobierno acordare préviamente someter al conocimiento del Consejo las reclamaciones de las partes; y de los recursos de reposicion, aclaracion y revision de sus providencias y resoluciones.

Para comprender mejor la naturaleza de las atribuciones del Consejo, debe tenerse presente que, aparte de las que determina el artículo primero del Real decreto de 30 de Diciembre de 1846, conforme al espíritu del mismo, y por virtud de otras varias disposiciones, le competia asimismo conocer, á la vez que á los consejos provinciales, segun los respectivos casos, acerca de los contratos para el servicio de correos, caminos, canales y

puertos: sobre bienes nacionales, minas, contribuciones, y sobre todos los negocios, en que se tratára de obligaciones recíprocas de la Hacienda y de los particulares, cuya revocacion pudiera acordarse por la via contenciosa; pues, por regla general, los consejos provinciales conocian en primera instancia de las cuestiones contenciosas, promovidas con motivo de los actos administrativos de la autoridad civil de la provincia; y el Consejo Real de las demandas, á que daban lugar los actos de la administracion central, esto es, del Gobierno, ó de las direcciones generales, cuando causaban estado.

Como tribunal de alzada, competia al Consejo Real conocer en apelacion y nulidad, de las resoluciones de los consejos provinciales, y de las de cualquiera otra autoridad, que entendiera en primera instancia de negocios contencioso-administrativos; pero la apelacion no procedia siempre, sino cuando el interés de la cuestion, ó valor sobre que versara la demanda, en el caso de poderse sujetar á una apreciacion material, llegaba á 2,000 reales. El conocimiento de las apelaciones, interpuestas en los fallos de los consejos provinciales, en materia de cuentas, no correspondia al Consejo Real; sino al Tribunal de Cuentas del Reino.

Estos eran los asuntos contenciosos, de que como tribunal administrativo, si bien dependiendo la validez legal de sus consultas como sentencias, de la soberana aprobacion, segun dejamos indicado, entendia el Consejo Real, conforme á los Reales decretos de 23 de Setiembre y 30 de Diciembre de 1846: Real órden de 25 de Enero, ley de 11 de Abril y reglamento de 31 de Julio de 1849: ley de 20 de Febrero de 1850: ley de 25 de Agosto de 1851: Real órden de 20 de Setiembre de 1852, y Real decreto de 21 de Mayo de 1853.

El Consejo Real, sin variacion sustancial, en su organizacion ni en sus atribuciones, subsistió hasta que, en 14 de Julio de 1858, por virtud de un Real decreto, dejó su primitivo nombre, y tomó el de Consejo de Estado, como decimos en su artículo.

Y en otra parte hemos indicado una irregularidad en el procedimiento contencioso-administrativo del Consejo Real; y es que, estando declarado por las leyes comunes que el protocolo no pueda sacarse de su escribanía ó archivo, y que de sacarlo, no haga fé en juicio, por la ley del Consejo Real podia ser reclamado, y tenido á la vista.

CONSEJO DE REGENCIA. El que se nombra, ó la ley determina préviamente para auxiliar, en el gobierno de un Estado monárquico, al Regente, ó la Regencia del Reino. Así Fernando VII, en su testamento dejó nombrado un Consejo de Regencia, para aconsejar y dirigir á su Augusta viuda, Doña María Cristina de Borbon, á la cual nombraba, y fué Regente del reino, durante la menor edad de su hija, la Reina Isabel II: Consejo de Regencia, de tal autoridad, que ante sus prerogativas tendria las suyas en suspenso el Consejo de Estado. Véase REGENTE.

CONSEJO DE SANIDAD. Así se llamó la corporacion, creada por Real decreto de 17 de Marzo de 1847, en reemplazo de la *Junta Suprema de Sanidad del Reino*, que se suprimia en la misma fecha.

El Consejo se consideraba como agregado al ministerio de la Gobernacion del Reino, y sus atribuciones eran puramente consultivas. Se componia del Ministro de la Gobernacion, presidente; de un vice-presidente; del jefe director de los ramos de Correccion, Beneficencia y Sanidad, en el mismo ministerio; de otros trece vocales numerarios, y de ocho supernumerarios, nombrados por el Rey, á propuesta del Ministro de la Gobernacion. Los vocales del Consejo debian ser nombrados entre las personas, que mas se hubieran distinguido en las diversas carreras del Estado, y distribuirse las plazas, siempre que no hubiera inconveniente, en esta forma: una para cada una de las carreras de Guerra, Marina, Hacienda, Diplomacia ó Consular, y Magistratura, y dos para la de Administracion. Los seis vocales restantes habian de ser nombrados entre las personas, que se hubieran distingido por sus conocimientos en las ciencias médicas, naturales ó químicas. (Dicho Real decreto, arts. 4.°, 5.° y 6.°)

El Consejo debia ser consultado: sobre las reformas ó mejoras, que hubieran de hacerse en la organizacion y servicio de la policía esterior, y en especialidad, de la marítima: sobre todo lo relativo al ejercicio de los diversos ramos de la ciencia de curar, y á los establecimientos de aguas minerales: y sobre la importacion, elaboracion y venta de las sustancias venenosas y medicinales. Debia tambien dar su dictámen, cuando el Gobierno se lo pidiera, sobre los demás asuntos, que tuvieran relacion con la sanidad marítima y terrestre, policía de salubridad y policía médica. Podia, por fin, elevar al Gobierno las esposiciones que creyera convenientes, sobre reformas ó mejoras en los diferentes servicios, que quedan indicados (id. art. 11 y 12).

La ley de sanidad de 28 de Noviembre de 1855, confirmó la existencia del Consejo, con la misma dependencia del ministerio de la Gobernacion, y con iguales atribuciones consultivas, además de las que el Gobierno determinase para casos especiales. Varió, sin embargo, algun tanto su organizacion, y mandó se compusiese, además del Ministro, presidente; de un vicepresidente, que correspondiera á las clases mas elevadas de los empleados cesantes ó jubilados en el ramo administrativo; del director general de sanidad; de los directores generales de sanidad militar del ejército y armada; de un jefe de la armada nacional; de un agente diplomático; de un jurisconsulto; de dos agentes consulares; de cinco profesores en la facultad de medicina, tres en la de farmacia y un catedrático del colegio de veterinaria; de un ingeniero civil y de un profesor académico de arquitectura (ley citada, arts. 3.° y 4.°). Por último, el Consejo tenia su secretaría, compuesta de un secretario, tres oficiales y demás dependientes necesarios para el servicio de la oficina (id., art. 8.°).

La ley de sanidad de 1855 se puso en ejecucion desde luego. Por Real decreto de 12 de Diciembre del mismo año se declaró disuelto el Consejo, que hasta entonces existia; y por otro decreto de la propia fecha se estableció de nuevo, con arreglo y sujecion al artículo 4.° de la ley. Carecia, sin embargo, la corporacion de un reglamento orgánico; y para suplir este vacío se espidió el Real decreto de 19 de Junio de 1867, por el cual se concretaron la categoría y condiciones, que deberian tener los nombrados consejeros, y se especificó el por menor de los asuntos sobre que habia de oirse el dictámen del Consejo.

En tal estado de cosas, el Ministro de la Gobernacion del Gobierno provisional, espidió un decreto en 18 de Noviembre de 1868, por el cual se disuelve el *Real Consejo de Sanidad*, se anulan los reglamentos de 19 de Junio y 6 de Agosto de 1867, y se crea en lugar del Consejo suprimido una *Junta superior consultiva de Sanidad*.

CONSEJO Y CAMARA DEL PATRONATO ECLESIASTICO. Conocida es la solicitud, que siempre han merecido á la Corona los asuntos eclesiásticos; muy señaladamente en su enlace con las prerogativas de la misma y con los deberes del Soberano, como tal.

Sabido es que uno de los principales centros consultivos sobre el particular, lo fué el Consejo y Cámara de Castilla, cuyas atribuciones quedan espuestas en su artículo: y así mismo que, suprimidos los antiguos Consejos, y por tanto la Cámara, los asuntos judiciales de esta se encomendaron al Tribunal Supremo de Justicia.

Para los consultivos eclesiásticos, por decreto de 22 de Abril de 1851, y Real Instruccion de la misma fecha, se constituyó la llamada junta consultiva eclesiástica; y no obstante que los asuntos eclesiásticos se encomendaron sucesivamente al Consejo de Estado, al Consejo Real de España y de las Indias, y al Consejo Real, en 2 de Mayo de 1851, suprimiendo la junta consultiva eclesiástica, se creó el Consejo y Cámara eclesiástica. Componíase del Arzobispo de Toledo, con la presidencia, y del Patriarca de las Indias, ambos consejeros natos: un eclesiástico, constituido en dignidad, con residencia en la Córte, y los demás de su clase, que se creyesen necesarios: de dos ministros del Tribunal Supremo de Justicia; y cuatro altos funcionarios, efectivos ó cesantes, cuyos cargos todos serian honoríficos y gratuitos. Uno de los cua-

tro altos funcionarios hacia de fiscal. Los individuos de la seccion de negocios eclesiásticos en el Ministerio de Gracia y Justicia, prestaban sus servicios en la Cámara. El jefe de dicha seccion era secretario de la misma. En asuntos graves era consultado el Consejo Real.

Por decreto de 17 de Octubre de 1854, fué suprimida esta Cámara, creando en su lugar el Consejo y Cámara del Patronato eclesiástico. Componíase de un decano, seis vocales, fiscal y teniente fiscal. Todos los cargos eran honoríficos, y gratuitos; salvo el de teniente fiscal, que tenia la dotacion de 20,000 reales.

Como las Cámaras anteriores, conocia de lo consultivo eclesiástico; y hasta que otra cosa se determinase por una ley, de la obtencion y *pase* de bulas; y, aunque en forma consultiva tambien, de los negocios contencioso-administrativos del Patronato Real.

A su vez esta Cámara del Patronato eclesiástico fué tambien suprimida por Real decreto de 21 de Noviembre de 1857, y agregadas sus atribuciones al Consejo Real. Véase CÁMARA ECLESIÁSTICA (*Consejo de la*).

CONSEJO Y CÁMARA DE ULTRAMAR. Corta fué la duracion de estas instituciones, y hablamos de ellas en un mismo artículo, por lo ligadas que estaban una á otra, y porque ambas fueron suprimidas en un mismo decreto.

El deseo de mejorar la situacion de nuestras provincias de Ultramar, tan dignas de la solicitud de la madre patria, ha hecho ensayar constantemente los medios de administracion, creando y suprimiendo multiplicadas instituciones. Antes de crear un Ministerio especial, como al fin tuvo efecto, se ensayó el concentrar en la presidencia del Consejo de Ministros la suprema gestion de Ultramar, salvo lo que fuese especial de los ministerios de Hacienda, Guerra y Gracia y Justicia. Tuvo así lugar por Real decreto de 30 de Setiembre de 1851; y en el mismo, para auxiliar la accion de la presidencia é ilustrar al Consejo de Ministros, con consultas necesarias, se creó un *Consejo de Ultramar*. Era su presidente el del Consejo de Ministros, y se compondria de ocho consejeros propietarios con sueldo, vice-presidente y fiscal. Y tendria tambien ocho consejeros estraordinarios, que se renovarian cada tres años, y cuyo cargo seria honorífico y gratuito. En defecto del presidente del Consejo de Ministros, presidia el Ministro de la Corona, que se hallase presente.

La presidencia despacharia, con acuerdo del Consejo de Ministros, el cual, de necesidad, oiria previamente al Consejo de Ultramar, sobre los asuntos siguientes:

1.° Sobre todo lo que afectase ó pudiese afectar la seguridad interior ó esterior de de aquellos dominios, y á su régimen y órden administrativo.

2.° Fijar anualmente el presupuesto de gastos é ingresos, y las fuerzas de mar y tierra.

3.° Sobre disposiciones y medidas generales en cualquier ramo de la administracion pública.

4.° Sobre creacion y supresion de cargos de toda clase.

5.° Sobre propuestas para toda clase de cargos civiles, militares y eclesiásticos; presentaciones para prelacías, prebendas y beneficios eclesiásticos, que disfrutasen de asignacion de más de mil duros anuales; y empleos para el ejército y armada, desde coronel á capitan de navío inclusive.

6.° Para conceder grandezas, títulos y condecoraciones en aquellos dominios.

7.° Sobre concesion de honores y distinciones, que dieren lugar á tratamiento, y acerca de meros grados militares á las mismas personas.

8.° Sobre planes beneficiales, mejora y fomento de misiones y seminarios conciliares.

9.° En asuntos que cualquier Ministro reputara graves, y sobre el patronato de la Corona.

Por Real decreto de 26 de Enero de 1853 se creó en el mismo Consejo una *Cámara de Ultramar*, de cuya atribucion serian todas las propuestas. Se componia del vice-presidente y de cuatro consejeros, por los ramos de justicia, gobierno, guerra, marina y hacienda. Por este mismo decreto se creó la fiscalía del Consejo y Cámara.

Por Real decreto, en fin, de 21 de Setiem-

bre del propio año, fueron suprimidos el Consejo y Cámara de Ultramar.

CONSENTIMIENTO. Bajo una fórmula sencilla, y al parecer singular, que parece resolverse en una cuestion de palabra, se encierra, sin embargo, una cuestion filosófica de la mas alta importancia. Sicológicamente, el hombre, con relacion al órden moral, legal y social, está todo en el entendimiento y en la voluntad y la memoria, auxiliar que suministra materia, objetos, recuerdos del pasado á la libertad y al entendimiento.

Dícese consentimiento del verbo latino *consentire*, y este compuesto del verbo simple *sentire*, en el concepto de advertir, conocer, y la preposicion comunitiva *cum*, y por lo tanto, consentir, sentir con otro, del mismo modo que otro, en lo mismo que otro.

Sicológicamente, pues, consentimiento es un doble acto de la inteligencia, en que concurren y se combinan *advertencia* de parte del entendimiento, *deliberacion* de parte de la voluntad. Es así un acto racional, *imputable*, que nos hace merecer y desmerecer, que nos obliga moral y legalmente.

La filosofía y la ley examinan este acto bajo los mismos principios, por el propio criterio, en cuanto ha sido normal y plenamente libre el ejercicio de las dos potencias, de que procede. El filósofo y el legislador deben conocer y examinar con precision y criterio las causas, que turban, ó no, la libre accion del entendimiento y de la voluntad. De aquí las cuestiones de enajenacion mental, de estar ó no la persona agente en su acuerdo y cabal sentido; de *error*, que incide ó dá ocasion á la convencion ó resolucion; de *ignorancia* vencible ó invencible, como, en su caso, las de *dolo*, *fuerza*, *miedo*, que cae, ó no, con varon constante, etc. Profundizar en este estudio es deber inescusable del moralista, del filósofo, del legislador, del jurisconsulto.

Alguna vez el consentimiento parece no responder á su etimología: no tiene lugar entre dos ó mas personas; sino que se concreta en el mismo agente, entre este y su propio hecho; no ya externo; sino aun interno, versando por lo comun entonces en obligacion y responsabilidad en el órden moral. Versa tambien á veces en el órden legal, como cuando se consiente, esto es, se permite, tolera ó autoriza el mal, que se debia impedir, y mas si era deber personal el impedirlo, como á veces sucede, ya de hecho, ya con el mero disimulo, al padre, al amo, á la autoridad.

Tiene lugar, por último, respecto de un tercero, y entonces es tema comun de obligaciones y responsabilidad, ya en el órden penal, ya en el terreno de las convenciones.

Alguna vez el consentimiento se presenta como especial, como consentimiento cualificado, por ejemplo, en la compra-venta, que es requisito esencial y ha de recaer esplícitamente sobre la *cosa* y el *precio*. Aun se presentaba como mas especial en la estipulacion romana, mientras en otros casos basta que sea tácito é interpretable, segun las reglas de la moral y del criterio jurídico. Un estudio profundo filosófico del hombre y de las acciones humanas, como á su vez las leyes y la jurisprudencia, facilitan en todo caso las convenientes soluciones.

CONSENTIMIENTO PATERNO. Se entiende del que, segun todas las legislaciones, deben y han estado en el derecho de prestar, y de que les sea pedído para el matrimonio de los hijos.

Siendo este de tal importancia y trascendencia en el órden social y para utilidad de los propios hijos; siendo tan santos y tales los deberes de amor, subordinacion y respeto de los hijos para con los padres; y siendo y debiéndose suponer tales el amor y el interés de estos respecto de los hijos; no solo no es estraño que hasta tal punto, como veremos, y es sabido, se haya reconocido la consecuencia y la necesidad moral y social del consentimiento paterno; sino que lo estraño y violento seria lo contrario.

Hablan, pues, de él todas las legislaciones, aunque no siempre fundándolo y esponiendo su procedencia bajo su verdadero principio, esto es, bajo el principio moral y filosófico; sino alguna vez bajo el principio social peculiar. Así, por ejemplo, entre los romanos, cuando asentaba la legislacion el *jus vitæ et necis* del padre sobre el hijo; que podia dar

este en noxa; que el hijo, en fin, era *cosa* para él, y no persona, ¿cómo no hacer perpétuo el derecho del consentimiento paterno? Pero desaparecia la personalidad humana en el hijo, y ni ésta, ni la libertad racional inherente á ella, eran apreciadas, ni garantidas, moral y filosóficamente.

En cambio otras legislaciones, como la canónica, conciliaban, en el punto en cuestion, la autoridad del padre con la libertad del hijo.

Entre nosotros, la movilidad activa de la legislacion sobre el matrimonio, podrá inducir novedades que en su dia habrán de notarse, como lo serán en el artículo **MATRIMONIO**; pero en todo caso la legislacion universal comparada sobre el consentimiento paterno, es un cuerpo de doctrina que deben consultar, y siempre consultaron con utilidad el legislador, el juzgador y el jurisconsulto, y en este concepto vamos á reseñarla.

El consentimiento paterno, pues, que, con mayor ó menor amplitud, se vé adoptado en la legislacion mosáica, y en los antiguos pueblos, era condicion *sine qua non*, entre los romanos, con la amplitud que queda indicada (leyes 1.ª y 18, tít. 2.º, lib. 23 del Digesto).

Segun Justiniano, los hijos de familia contraen matrimonio «con tal que obtengan antes el consentimiento de los padres, *quorum in potestate sunt.*» (*Institutiones*, lib. 1.º, título 10, proem.).

El consentimiento habia de ser otorgado por el padre civil, no por el natural; porque, como antes se indica y es sabido, la antigua familia romana, propiamente dicha, no se basaba fundamentalmente en los vínculos de la naturaleza; sino en los del poder, emanado de la ley orgánica de su constitucion; hasta que Justiniano, reconociendo en los vínculos de sangre la debida preferencia, estableció la cognacion, como mejor título y base mas legítima para los derechos familiares, no obstante lo cual, confirmó la doctrina de Ulpiano sobre el consentimiento paterno. Solia bastar que este fuese tácito, presumiéndose legalmente en ciertas ocasiones, como por ejemplo, cuando se ignoraba, durante tres años, la existencia ó el paradero del padre ausente. En tal caso podian el hijo ó la hija casarse con personas que, por sus condiciones y circunstancias, se presumiera que habian de agradar al padre.

Pero las relaciones familiares se fueron suavizando en virtud de disposiciones de Severo, Antonino y el mismo Justiniano, insertas en el *Código* y en el *Digesto*, preparándose lentamente la emancipacion de la mujer, del hijo y del esclavo, y la restitucion de su propia dignidad y personalidad al hombre, á medida que sobre aquella poderosa sociedad, como sobre la humanidad, difundia sus rayos la luz del cristianismo. Así vemos que la ley Julia, dada por Augusto, de la cual Hugo hace oportuna mencion en su *Historia del Derecho romano* (pág. 333), anuló todos los obstáculos, que al matrimonio se oponian, hijos de una condicion, de un juramento, de falta de tutor, y del consentimiento del padre. Y conforme á la ley 19, tít. 2.º, libro 23 del *Digesto*, cuando los padres negaban sin fundado motivo su consentimiento para el matrimonio de los hijos, podian los procónsules y otros magistrados compelerlos para que lo prestasen.

Hemos dicho que la necesidad del consentimiento paterno se fundaba en la pátria potestad, por cuya razon no era necesario el de la madre, que nunca la ejercia; pero no obstante, el juez exploraba su ánimo y el de los parientes para el matrimonio de la hija menor de edad y huérfana de padre, *patris auxilio destituta* (ley 20, tít. 4.º, lib. 5.º Cod.). Tampoco fué necesario por Derecho romano el consentimiento de los tutores, curadores parientes, ni afines, segun el texto de las leyes (leyes 8.ª y 20, tít. 4.º, lib. 5.º id.).

No hay que decir que, durante mucho tiempo, estuvo vigente en España la legislacion romana, hasta la publicacion del Fuero Juzgo, que introdujo ciertas modificaciones sobre esta materia.

Es notable la forma en que el Rey Flavio Recesvindo, espresaba la necesidad del consentimiento paterno. Si alguno desposa la manceba de voluntad de su padre (ley 2.ª, tít. 1.º, lib. 3.º, Fuero Juzgo), «é la manceba

contra la voluntad de su padre quisiere casar con otro, é non con aquel, á quien la prometió su padre, *aquesto non lo sofrimos*, por ninguna manera, que ella lo pueda fazer.» La misma ley establece penas contra la desposada á despecho de su padre, condenándola y al esposo, á *ser metidos en poder* del que, por voluntad paterna, hubiere sido su cónyuge, y contra los hermanos, madre ó parientes que consentian el casamiento, los cuales debian pechar una libra de oro á quien el Rey mandase.

La ley 11 del mismo título habla de los casos, en que los hermanos retardan el casamiento de su hermana, ó esta se casa sin consentimiento de los mismos. Y la 8.ª, título 2.º del citado libro 3.º ordena que, si una mujer libre quiere casarse con hombre libre tambien, «el marido della deve fablar primeramientre con su padre,» y si se casa contra la voluntad de este, ó de la madre, ella y sus hijos quedan desheredados.

Hemos insinuado que la influencia del cristianismo se fué haciendo sentir, aun en las legislaciones mas duras. Así, el respetable escritor Troplong (*Influencia del cristianismo en el derecho civil de los romanos*) nota oportunamente, que entre estos llegó á establecerse remedio legal contra el irracional disenso del padre; no ya que no permitia en tal caso el matrimonio; sino aun para cuando se negaba á dotar. Y así era, en efecto, entre otras disposiciones imperativas, pero muy señaladamente, por la que cita dicho autor. «Qui liberos, quos habent in potestate, *injuria prohibuerint* ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt; ex constitutione divorum Severi et Antonini, per proconsules, præsidesque provinciarum *cogantur* in matrimonium collocare, et dotare. *Prohibere* autem *videtur, et qui conditionem non quærit.*» (Ley 19, tít. 2, De ritu nuptiarum, libro 23, Digesto.)

El Fuero Juzgo nada dice sobre este particular, ni sobre el disenso de las personas llamadas á suplir el consentimiento paterno. En ambas legislaciones se guarda silencio acerca de la edad, en que fuera lícito á los hijos casarse sin consentimiento paterno, lo cual demuestra que este era siempre necesario: solamente hallamos una prohibicion del casamiento de mujeres de *grand edad*, con hombres de *pequenna edad*, en la ley 4.ª, título 1.º, libro 3.º del Código visigodo, la cual declara al mismo tiempo en libertad á la viuda, para casarse con *qual baron quisiere*, que sea de edad *complida é sea convenible*.

Por último, es digna de atencion la novedad introducida por el Fuero Juzgo, concediendo á la madre, aunque en términos menos esplícitos, el derecho de casar á los hijos ó á las hijas, derecho que perdia, contrayendo segundas nupcias, y que en este caso pasaba á los hermanos.

Por el Fuero Viejo de Castilla se exigia tambien el consentimiento paterno, espresándose las personas que habian de prestarlo. La ley 1.ª, y mas terminantemente la 2.ª del título 5.º, libro 5.º, ordena, que si alguna soltera (*manceba en cabellos*) se casa, no siendo *con placer* de su padre ó de su madre, teniéndolos; ó de sus hermanos, si los tuviere, ó de sus parientes mas cercanos, debe ser desheredada, y puede serlo por el hermano mayor. Pero tambien la ley, previendo el abuso que pudieran cometer los hermanos y parientes, dispone que, si estos no quisieren casarla *por amor de eredar lo suo*, ella debia *mostrarlo en tres Viellas*, no incurriendo en la pena de desheredacion, si luego se casaba.

Esta misma disposicion fué adoptada por las Córtes de Nágera y establecida por el Rey San Fernando, en la compilacion de los fueros de Búrgos, hallándose modificada en el Fuero Real, cuya ley 2.ª, tít. 1.º, libro 3.º, prohibe la desheredacion de la mujer, que se casare sin licencia de sus hermanos; escepto cuando lo hiciere con algun enemigo de ellos, ó que les hubiese inferido alguna afrenta, pues en tal caso habia de ser desheredada, como igualmente cuando «se fuere con alguno, de manera que sea á deshonra de ella é de su linage.» La desheredacion era solo de los bienos paternos y maternos, sin pérdida del derecho á la herencia de los hermanos, parientes y estraños. Tampoco podia ser desheredada, segun la ley 3.ª, la viuda, que,

muertos sus padres, se casaba contra la voluntad de sus hermanos; con tanto mas motivo, cuanto que la siguiente ley 4.ª declara libre de toda pena á la viuda que, teniendo padre ó madre, se casa sin su mandato. Lo contrario le sucedia á la doncella, que contraia matrimonio sin consentimiento de su padre *é de su madre*: para librarse de la pena de desheredacion (ley 5.ª), necesitaba ser perdonada por ambos, no pudiendo heredar los bienes de aquel, que no la perdonase.

Una novedad importante vemos introducida en este código: el límite de la minoridad para el casamiento de la mujer: pues la ley 6.ª del citado título, determina que, si una doncella, *mayor de treinta años*, se casa *con home conveniente*, sin licencia paterna, no sufra por ello ninguna pena. Vemos, pues, que las leyes del Fuero Real hablan solo de la mujer, y tienden á mejorar su situacion social y favorecer sus intereses, aunque guardan silencio sobre el recurso, que hubiera de entablarse, en el caso de injusto disenso; siendo de presumir que no se diera recurso contra la negativa del padre ó de la madre, supuesto que solo el *perdon* libraba de la desheredacion á la hija. Respecto de los hermanos, debe suponerse que existia algun recurso, toda vez que la citada ley 2.ª espresa las causas legítimas de oposicion al casamiento de la hermana; pero no dice qué autoridad ó tribunal habria de declararlas justas ó injustas, cuya omision tambien se nota en la ley del Fuero Viejo de Castilla, de que antes hablamos.

El Código de las Partidas confirmó la necesidad del consentimiente paterno, bajo la pena de desheredacion de la hija (ley 10, título 2.º, Part. 4.ª) y *del hijo*; pues en la ley 11 del mismo título se prescribe terminantemente: «e lo que dize en esta ley, e en la de ante della, de las fijas, *entiéndese tambien de los fijos.*» Vemos, pues, infundada la opinion de los que afirman que el código alfonsino solo habla de las hijas, al tratar del consentimiento paterno; porque, si bien las leyes que dejamos citadas versan principalmente sobre los esponsales, no es menos cierto que establecen la necesidad de dicho consentimiento para la celebracion del matrimonio, bajo pena de desheredacion, terminantemente prescrita en la ley 5.ª, tít, 7.º de la 6.ª Partida, contra la hija menor de veinticinco años, cuando se casare contra la voluntad paterna, ó cuando se prostituyese.

A falta del consentimiento del padre, era necesario, segun la ley 1.ª, tit. 3.º de la misma Partida, el de la madre ó el de los mas próximos parientes, bajo la pena de declararse *encubierto* el matrimonio, é ilegítimos los hijos, que de él naciesen. La ley 5.ª, del citado título confirma la necesidad del consentimiento, siendo condenados los contraventores (reproduccion de la ley del Fuero Juzgo), á quedar en poder de los parientes mas cercanos de la mujer, sufriendo además otras penas accesorias.

Vemos, por consiguiente, que la legislacion alfonsina habla, aunque no en los términos esplícitos, que fueran de desear, de las personas que habian de suplir el consentimiento paterno, limitando su necesidad, respecto de la mujer, solo hasta la edad de 25 años; pero no establece ningun recurso en su favor, para el caso del disenso injusto.

Las Ordenanzas Reales de Castilla contienen disposiciones muy terminantes, sobre la materia que esponemos. Con la pena de estrañamiento, y la de *muerte*, si volvia á estos reinos, era castigado, segun la ley 2.ª, título 1.º, lib. 5.º de este código, el que, viviendo con algun señor, se casase con la hija ó con la parienta del mismo, sin su mandato: disposicion igual á la contenida en la ley 2.ª, título 21 del Ordenamiento de Alcalá: y por otra ley de D. Juan II, en Ocaña, que es la 4.ª del mismo título de las citadas Ordenanzas Reales, confirmatoria de otras antiguas, al parecer en desuso, se mandó que la mujer que se casara «sin voluntad y placer de los hermanos,» hallándose en poder de estos por fallecimiento de su madre, perdiese las herencias paterna y materna.

Tambien las leyes de Toro exigieron el consentimiento, como condicion para el matrimonio, supuesto que la ley 49, reproducida por Felipe II en las Córtes de Madrid, de 1585, cap. 58, autoriza al padre y á la ma-

dre para desheredar á los hijos ó á las hijas, que sin su permiso lo contrajeren, debiendo sufrir por ello, el contrayente y cuantas personas intervinieran en el asunto, la *confiscacion* de sus bienes y el destierro, que ha de entenderse estrañamiento *con prohibicion de volver á estos reinos, bajo pena de muerte.*

Tal fué, durante los períodos de la monarquía visigoda y de la Edad media, nuestra legislacion sobre esta materia.

La Iglesia, como siempre, atendia á favorecer y formular la moral y la justicia. Este espíritu animaba á los padres del celebérrimo Concilio Iliberitano, por cuyo cánon LIV se dispuso que se abstuvieran de la comunion por tres años los padres que quebrantasen la fé de los esponsales. El mismo sentimiento de justicia dominó sobre esta materia en el tercer concilio de Toledo, celebrado el cuarto año del reinado de Recaredo, á 6 de Mayo de la era 627, en cuyo cap. X se mandó que no se obligara á las vírgenes á recibir marido, ni contra la voluntad de sus padres, ni contra la suya propia.

La falta del consentimiento paterno era, segun hemos dicho, una causa de nulidad del matrimonio, conforme á la antigua legislacion romana, observada en España durante mucho tiempo, y seguida en nuestros dias en Prusia, Holanda, Austria y otros países protestantes ó mistos; pero como esta nulidad no puede traspasar los límites de la esfera puramente civil, el concilio de Trento, en el *Decreto de reforma sobre el matrimonio*, capítulo 1.°, anatematizó á los que «falsamente afirman que son írritos los matrimonios contraidos por hijos de familia sin consentimiento de sus padres, y que estos pueden hacerlos ratos ó írritos,» no obstante que la Iglesia los ha prohibido siempre por muy justos motivos. Para evitar su repeticion, el mismo concilio de Trento, insistiendo en las determinaciones del Lateranense, celebrado en tiempo de Inocencio III, mandó que se amonestasen públicamente los que hubieran de contraer matrimonio.

Grandes reformas introdujo en la antigua legislacion sobre el consentimiento paterno Cárlos III, en virtud de su célebre pragmática de 23 de Marzo de 1776.

El primero de sus artículos ordena que los hijos é hijas de familia, menores de 25 años, debiesen, para celebrar el contrato de esponsales, pedir y obtener el *consejo* y *consentimiento* de su padre, y, en su defecto, de la madre, y á falta de ambos, de los abuelos por ambas líneas respectivamente, y, no teniéndolos, de los dos parientes mas cercanos que se hallen en la mayor edad y no sean interesados ó aspirantes al tal matrimonio; y, no habiéndolos capaces de darlo, de los tutores ó curadores; bien entendido que, prestando los espresados parientes, tutores ó curadores su consentimiento, deberán ejecutarlo con aprobacion del juez Real, é interviniendo su autoridad, si no fuese interesado; y siéndolo, se devolverá esta autoridad al corregidor ó alcalde mayor realengo, mas cercano. Esta obligacion, segun el art. 2.°, era estensiva á los individuos de todas las clases de la sociedad, sin escepcion alguna.

Por el art. 3.° se declaró inhábiles y privados de todos los efectos civiles, á los que contrajesen matrimonio, sin el espresado consentimiento, y que la falta del mismo fuese causa justa de desheredacion. Sin embargo, por una Real resolucion, á consulta del Consejo, de 5 de Octubre de 1790, comunicada en decreto de 26 de Diciembre, se aclaró este art. 3.°, diciéndose, que no bastaba el hecho de contraer matrimonio sin el debido consentimiento, para que quedasen desheredados los contrayentes; sino que habia tambien de existir la desheredacion misma, declarada y formulada espresamente por los padres ó abuelos, como pena de haber faltado al debido respeto.

Los mayores de veinticinco años deberian, segun el art. 6.°, pedir el *consejo paterno*, bajo las mismas penas establecidas en los artículos anteriores.

Tuvo presente Cárlos III la posibilidad de que se ejerciese violencia sobre los contrayentes, cuya libertad habia menester de proteccion; y con este fin dispuso en el artículo 8.°, que los padres, abuelos, deudos, tutores y curadores, en su respectivo caso,

deban precisamente prestar su consentimiento, si no tuvieren justa y racional causa para negarlo, como lo seria, si el tal matrimonio ofendiese gravemente al honor de la familia, ó perjudicase al Estado. Y por el art. 9.° estableció el recurso de «*irracional disenso*» para ante el Consejo, Chancillería ó Audiencia del respectivo territorio, de cuyo fallo no se admitia apelacion, ni podia, segun el artículo 10, darse testimonio mas que de lo principal del auto, favorable ó adverso, debiendo guardarse la mayor reserva sobre el procedimiento, bajo la pena de privacion perpétua de oficio á los jueces y escribanos.

Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 se refieren especial y particularmente á los Infantes y grandes de España, títulos de Castilla, consejeros, ministros togados de todos los tribunales del Reino y militares.

Como si no fueran bastante eficaces las penas civiles establecidas en esta pragmática, se encargó por el art. 16 á los ordinarios eclesiásticos, que, en cumplimiento de la encíclica de Benedicto XIV, pusiesen el mayor cuidado en la admision de esponsales y demandas, á que no precediese el consentimiento de las personas que debieran prestarlo; y por los artículos 17, 18 y 19 se recomendó á las autoridades eclesiásticas la mas fiel observancia del concilio de Trento y de lo dispuesto en esta pragmática (ley 9.ª, tít. 2.°, lib. 10, Nov.).

La simple esposicion, que dejamos hecha de su parte sustancial, basta para conocer las innovaciones, que introdujo en la materia, fijando como término de la edad, hasta la cual es necesario el consentimiento paterno, la edad de los veinticinco años, y declarando necesario el consentimiento paterno, cualquiera que fuese el sexo del contrayente: concediendo á los abuelos un lugar de preferencia sobre los demás individuos de la familia, despues del padre y de la madre, para prestar su consentimiento: exigiendo que los mayores de veinticinco años hayan de pedir *consejo* paterno: estableciendo una grave penalidad contra los infractores de la pragmática, y procurando evitar los abusos, que se pudieran intentar contra los contrayentes, en beneficio de cuya libertad é intereses se concedia, como en las leyes romanas, el recurso de *irracional disenso* para ante los presidentes de las Audiencias y Chancillerías.

En Real cédula del mismo año (ley 10, id., idem, id.) se recordaba á los prelados eclesiásticos la encíclica de 17 de Noviembre de 1741, en que Benedicto XIV encargó se averiguasen la calidad, grado, condicion y estado de los que hubieran de contraer matrimonio, y encomendándoles su cumplimiento, y el de la pragmática antes citada.

Tambien es notable la resolucion adoptada por el mismo Carlos III, mandando practicar en todas las diócesis, y hacer observar por todos los tribunales, el método conocido del arcipreste de Ager (leyes 14 y 15, id.).

Nada diremos del fin principal de la pragmática de 1776, y sí que, una vez conseguido, dejó de haber ciertos inconvenientes en modificar sus prescripciones, harto severas, y no conformes con los nuevos principios, que empezaban á dominar en las sociedades europeas, y apareció en el inmediato reinado la tambien célebre pragmática de 10 de Abril de 1803 (ley 18, id., id.).

Ordenóso en ella que, ni los hijos, ni las hijas de familia, menores respectivamente de veinticinco, y veintitres años, pudiesen contraer matrimonio sin licencia de su padre, el cual, en el caso de resistir el que sus hijos ó hijas intentasen, no estaria obligado á dar la razon, ni esplicar la causa de su resistencia ó disenso. Los hijos é hijas, mayores de aquellas edades podrian casarse á su arbitrio, sin necesidad *del consejo*, ni del consentimiento de su padre: en defecto de este, tendria la misma autoridad la madre, pero adquiriendo entonces la libertad de casarse, los varones á los veinticuatro años y las hembras á los veintidos: á falta de padre y madre, tendria la misma autoridad el abuelo paterno, y, á falta suya, el materno, adquiriendo en tal caso la libertad, los varones á los veintitres años y las hembras á los veintiuno: á falta de los padres y abuelos, deberian suplir el consentimiento los tutores, y por falta de estos el juez del domicilio, todos sin obligacion de esplicar la causa, pero adqui-

riendo entonces la libertad de contraer matrimonio, los varones á los veintidos años y las hembras á los veinte.

Se conservó el recurso ante los presidentes de las Chancillerías y Audiencias; se estableció contra los vicarios eclesiásticos, que autorizasen algun matrimonio sin los debidos requisitos, la pena de espatriacion y ocupacion de temporalidades, y se adoptaron otras disposiciones de interés secundario sobre las personas que necesitasen, con arreglo á la pragmática de 1776, licencia Real para casarse.

Tal fué en sustancia la ley de 1803, cuya aplicacion, durante sesenta años, no habia sido del todo desembarazada, no dejándose de desear su reforma, que al fin se verificó por la ley de 20 de Junio de 1862.

Ambas pragmáticas dispusieron, que del recurso sobre disenso, conociesen los presidentes de las Chancillerías y Audiencias del Reino; pero, como á principios del siglo desempeñaban estos cargos los capitanes generales de los respectivos territorios, resultaba la anomalía de que entendiesen en asuntos, completamente estraños á su profesion, las autoridades militares. Para evitar esto, las Córtes de Cádiz, por su decreto de 14 de Abril de 1813, confirmado por la ley de 3 de Febrero de 1823, art. 261, y restablecido por otro decreto de 30 de Agosto de 1836, trasfirieron á los jefes políticos de las provincias la espresada facultad; y por el citado artículo 261, de la ley de 1823, se declaró que el jefe político competente, se entendiera ser el de la provincia, donde tuvieran su vecindad, domicilio ó residencia el padre, madre ó persona, cuyo consentimiento se hubiera de suplir. Posteriormente, por Real órden de 1.° de Julio de 1846, se declaró que la facultad de hacer los depósitos correspondia á los alcaldes, como delegados de los jefes políticos ó gobernadores civiles.

Dióse en esto al público el *Proyecto de código civil*, por Real órden de 12 de Junio de 1851.

Su artículo 51 dispone que el hijo de familia, que no ha cumplido veintitres años, y la hija menor de veinte, necesitan el consentimiento paterno para casarse. El 52 ordena que, faltando el padre ó hallándose impedido para prestar su consentimiento, corresponde esta facultad á la madre, y en su defecto, al tutor, con acuerdo del consejo de familia; pero entendiéndose que, en este último caso, á los veinte años de edad cesa en el pupilo la obligacion de obtener el consentimiento. Habiendo disenso entre el tutor y el consejo de familia, prevalecerá el voto favorable á la celebracion del matrimonio. El artículo 53 prescribe terminantemente que las personas autorizadas para prestar el consentimiento, no necesitan espresar la razon, en que se fundan para rehusarlo; y contra su disenso no se admitirá recurso alguno.

Estos artículos 51 y 53 han sido literalmente copiados, y el 52, con leves modificaciones, en la ley de 20 de Junio de 1862, de que luego hablaremos.

La penalidad, establecida en la pragmática de 1803, fué notablemente reformada por el Código penal de 1848, que en su art. 399, correspondiente al 389 antiguo, dispone que el menor, que contrajere matrimonio sin el consentimiento de sus padres, ó de las personas que para el efecto hagan sus veces, será castigado con prision correccional; ó con arresto mayor, si las personas espresadas aprobasen el matrimonio, despues de contraido.

Tambien la ley de Enjuiciamiento civil, establecida por decreto de 5 de Octubre de 1855, aunque es una ley de procedimientos, introdujo ciertas novedades en la materia de disenso paterno, disponiendo que puede decretarse el depósito de mujer soltera, que trate de contraer matrimonio contra la voluntad de sus padres ó curador (art. 1277, núm. 3.°); que este depósito solo puede ser decretado por los jueces civiles ordinarios (art. 1278); que el juez competente es el de primera instancia del domicilio de la persona, que deba ser depositada (art. 1279), aunque, por circunstancias especiales, puede ser decretado interinamente por el del lugar, en que se encontrase la persona (art. 1280); que para el depósito de la mujer soltera debe preceder órden de la autoridad, á quien competa conocer del disenso (art. 1301). Dispone, asimis-

mo, que en casos de suma urgencia pueden los jueces constituir á la mujer en depósito provisional (art. 1302), y que el depósito continuará hasta que se verifique el matrimonio, á no ser que se denegare la licencia por la autoridad correspondiente, ó la mujer desistiere de sus pretensiones (arts. 1310 y 1311).

Además ordena dicha ley, qué cosas debe acreditar el menor, para que la autoridad judicial supla el consentimiento paterno, y en qué casos deja de surtir efectos legales el otorgamiento de la licencia dada por el juez de primera instancia (arts. 1367 al 1372).

Vino en esto la citada ley de 20 Junio de 1862. Su artículo 1.°, que es copia literal del 51 del *proyecto de código civil*, declara necesario el consentimiento paterno, para que se casen el hijo y la hija de familia, menores de veintitres y de veinte años respectivamente; debiendo prestarlo, por muerte ó imposibilidad del padre, la madre, y, sucesivamente en iguales circunstancias, el abuelo paterno y el materno (art. 2.°), y á falta de ellos, el curador testamentario y el juez de primera instancia (art. 3.°); pero se considerará inhábil al curador, cuando el matrimonio proyectado lo fuese con pariente suyo, dentro del cuarto grado civil. Tanto el curador, como el juez, en su caso, procederán en union con los parientes mas próximos; y cesará la necesidad de obtener su consentimiento, cuando los que desean contraer matrimonio, cualquiera que sea su sexo, hayan cumplido veinte años.

Los artículos 4.° hasta el 11 inclusive, determinan la forma en que se ha de constituir la junta de parientes, y los trámites y solemnidades de sus acuerdos.

Los marcados con los números 12 y 13 se refieren á los hijos ilegítimos.

Conformándose con el proyecto de Código civil, releva de dar la razon del disension á los padres y demás que se hallen en el caso. En virtud del art. 13, los hijos legítimos mayores de veintitres años y las hijas mayores de veinte, pedirán *consejo* para contraer matrimonio, á sus padres ó abuelos, por el órden prefijado en los artículos 1.° y 2.° Si el consejo no fuere favorable, no podrán casarse, hasta despues de trascurridos tres meses desde la fecha en que lo pidieron. Los hijos, que contraviniesen á las disposiciones de este artículo, incurrirán en la pena marcada en el 483 del Código penal (de tres á quince dias de arresto y reprension), y el párroco, que autorizase tal matrimonio, en la de arresto menor.

Gran celo por los intereses morales de la sociedad y de las familias, y por la suerte de la juventud, inocente ó apasionada, se mostró en la discusion de esta ley. Las diferencias, entre sus disposiciones y la pragmática de 1803, son tan palmarias, que consideramos innecesario fijarlas en este artículo, que concluiremos dando, como por vía de ilustracion de tan interesante materia, una idea general de la legislacion europea sobre el consentimiento paterno.

En todos los pueblos cultos se ha considerado como necesario; pero en la práctica se han seguido varios sistemas. Unas veces, como en Roma, en España durante el período de la monarquía visigoda, en Suecia y en Prusia, ha tenido ó tiene el hijo obligacion de pedir el consentimiento paterno en cualquiera edad de su vida; otras veces no se ha juzgado necesario este requisito, sino durante la menor edad civil, cuyo principio es el dominante en la pragmática de 1776 y en los códigos de Austria, la Luisiana y los cantones de Argovia, Vaud y Berna; ó bien se ha determinado la necesidad de pedirlo, durante una edad distinta de la menor civil, como lo vemos establecido en los códigos de las Dos Sicilias, Holanda, Francia, Baviera, Cerdeña y Gran Ducado de Baden, así como en nuestro Fuero Real, en la pragmática de 1803 y en la citada ley de 20 de Junio de 1862.

Aunque la menor edad concluye á los veintiun años en Francia, Nápoles y Cerdeña; sin embargo, el art. 488 del código francés manda que obtengan el consentimiento paterno para casarse, los hijos hasta los veinticinco años, y las hijas hasta los veintiuno; el 109 del sardo, declara necesario el consentimiento, cualquiera que sea la edad de los contrayentes: *d'ogni età*; y lo mismo prescribe el 46 del prusiano. El art. 49 del austriaco, el 100 del de la Luisiana, y el 110 del

bávaro, imponen dicha obligacion á los menores de edad, y el 63 del vaudense fija, indistintamente para el varon y para la hembra, la edad de veintitres años.

Respecto de las personas, que han de suplir el consentimiento paterno, el art. 99 del código de la Luisiana y el 10 del de Baviera llaman al tutor, cuando hayan muerto el padre y la madre del contrayente; el art. 150 del de Francia llama, por muerte de los padres, á los abuelos, y á falta de estos, al consejo de familia; pero solo cuando es menor de edad el aspirante al matrimonio; y el artículo 49 del código austriaco, sin mencionar á la madre ni á los abuelos, exige en caso de muerte ó incapacidad del padre, la autorizacion del tutor, aprobada por el tribunal de justicia.

Finalmente, en el caso de injusto disenso, el art. 112 del código de Cerdeña concede al hijo que pueda recurrir al senado, mandando que el recurso se sustancie con la mayor brevedad y con absoluto sigilo; el 165 del napolitano reconoce en el Rey la facultad de suplir el consentimiento paterno, cuando es negado con injusticia; el 68 del prusiano establece pura y simplemente un recurso judicial, y el 90 del código de Holanda lo concede tambien cuando, á falta de padre, madre y abuelos, hay que pedir el consentimiento á los tutores, y estos lo niegan.

Lo dicho evidencia la alta importancia moral y social de la cuestion, y la que en todos tiempos la han atribuido los legisladores, atentos, como es justo, á realzar y hacer valer, conciliándolas, la libertad del hijo y la providencial autoridad del padre, y uno y otro en relacion al órden social, lo cual todo autoriza siempre á repetir la hermosa máxima de los romanos: el hijo *non tantum parenti, cujus esse dicitur, verum etiam Republicæ, nascitur* (ley 1.ª, pár. 15, tít. 9.º, lib. 37, Digesto).

Andando los tiempos, el *consejo* paterno vino á modificar algun tanto la teoría del *consentimiento*: despues, en mayor escala, el *matrimonio civil*, consecuencia de la revolucion de 1868, como se espone en sus artículos respectivos.

CONSERJE. Voz importada, pero hispanizada ya: la persona, que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de un palacio, alcázar ó casa real. Equivale, por tanto, para los fines de derecho, á administrador ó mayordomo en la clase comun. Dícese conserjería la oficina ó despacho del conserje.

CONSERVADOR (JUEZ, EN LO CANÓNICO). En lo canónico el fin y facultades de los jueces conservadores fueron idénticas á las de dichos funcionarios en el órden civil; y la misma tambien la debilidad de su autoridad y proteccion. En ellos hacia mas el principio que representaban, esto es, la autoridad, benevolencia y solicitud pontificia, acatada sobre manera en aquellos tiempos, que la autoridad del cargo, pues que puede decirse que no era coercitiva; era de persuasion y proteccion. Y véase en razon de ello, y remontándose al siglo XIII, el testo de las Decretales: «*Statuimos*, dice el Pontífice Inocencio VI, *sint conservatores, quos plerumque concedimus, ut manifestis injuriis et violentiis defendere possint, quos et consuluimus defendendos: nec ad alia, quæ judicialem indaginem exigunt, quam possint extendere potestatem*» (cap. 1.º, *De officio et potest. judic. delegat. in Sexto*).

Como no podia menos, esta es tambien la doctrina recibida entre los canonistas. «*Conservator est judex, delegatus á Papa, datus ad tuendum aliquid contra manifestas injurias, seu violentias, judiciali non utens indagine.*» (Barbosa).

Segun el *cap. Hac institutione* (eod. tit. *in Sexto*), no podian ser nombrados conservadores, sino los prelados, dignidades y personados de las iglesias catedrales y colegiatas. Fué luego opinion y doctrina, que un simple canónigo de catedral puede ser reputado dignidad, para el efecto de ser nombrado conservador, y así se confirmó por constitucion de Gregorio XV.

Segun ella, nadie puede ser conservador de su propio conservador, ni del que está bajo su jurisdiccion ó dependencia.

No siendo dignidades los oficiales y vicarios generales de los obispos, no pueden ser

nombrados conservadores. Pero, siendo un principio general, que en lo eclesiástico solo al Papa compete la facultad de nombrar conservadores, y reputándose éstos delegados de Su Santidad, no hay principio, ni decretal, que ordene, ni menos convenza, que el Papa no puede delegar esta facultad *pro bono ecclesiæ*, y asi vino á prevalecer respecto de las órdenes mendicantes, salvo cuando están en regiones infieles.

Todavía la decretal de Bonifacio VIII, *Statutum*, dictó reglas sobre el particular.

La citada de Gregorio XV, publicada en 1621, vino confirmando las antiguas decretales del Sexto, y ordenando el cumplimiento del decreto del Concilio de Trento, sobre el particular, y restringiendo mas y mas la autoridad de los conservadores. Estos, segun ella, se limitaron á conocer del quebrantamiento manifiesto de los derechos, para cuya conservacion han sido nombrados: y aun en estos, mediando dudas ó dificultades, que exijan indagacion judicial, deben abstenerse, pena de suspension de funciones, durante un año, y de excomunion, de que no podrán ser absueltos, sino prévia indemnizacion á las partes de los perjuicios que por el procedimiento judicial se les hayan irrogado. El Concilio de Trento confirma la restriccion canónica de la autoridad de los jueces conservadores; si bien esplicando su benevolencia respecto de las universidades pontificias, colegios eclesiásticos ó de escolares, órdenes regulares, y establecimientos de beneficencia y humanitarios, como hospicios y hospitales (Ses. 14, cap. 3.° *De Reforma*).

Por bula, en fin, de Clemente XIII, de 25 de Abril de 1762, se confirmaron las de Bonifacio VIII, Gregorio XV é Inocencio X; y entre otras cosas, ordenó que los mendicantes, ni ningun otro órden de monjas, ó clérigos, que se hallen en país de infieles, puedan nombrar conservadores, sin que hayan de acudir á la Santa Sede.

Los conservadores no pueden ejercer fuera de la diócesis, ni pueden tampoco delegar. (Véanse las leyes 6, 7 y 8, tit. 1.°, lib. 2.°, Nov.)

CONSERVADOR (EN LO CIVIL). Por mucho tiempo fué costumbre que los Reyes, en lo temporal, como los Papas, en lo eclesiástico, concedian un protector especial á determinadas industrias, fundaciones, corporaciones, y eso en todas las órdenes sociales, como á un colegio, una catedral, una universidad, un canal de riego ó navegacion, una nueva industria, etc.; cuyos protectores llevaron el nombre de conservadores. De ordinario era uno solo á cada corporacion ó empresa; á veces dos, que obraban como adjuntos, ó conjuntamente.

El sistema de conservadores no fué una institucion general, en cuyo caso hubiera tenido reglas fijas y uniformes; sino una práctica, aunque bastante frecuente, casuística y de privilegio; y en cada Real carta, ó concesion, habian de buscarse la autoridad, el fin, y las atribuciones.

Unas veces las funciones de los conservadores eran de inspeccion, y proteccion, puramente administrativas; otras tenian estos jurisdiccion; aunque restricta, correccional, limitada á evitar, castigar y reprimir *las injurias y ofensas manifiestas y notorias*, y entonces dichos funcionarios se denominaban *jueces conservadores*.

En este caso, entraban ya en la categoría de *jueces privativos*; pero repetimos que con jurisdiccion muy restricta, y limitada al tema legal, que queda indicado. Las penas que imponian eran reparatorias y correccionales. Los conservadores de universidades, por ejemplo, empleaban de último, los mismos medios coercitivos y aplicaban las mismas penas, que despues los consejos de disciplina.

El uso autorizó que se llamasen jueces conservadores y jueces protectores, algunos jueces privativos; pero con impropiedad, pues tenian la plena jurisdiccion civil y criminal, que un verdadero tribunal ó juez de primera instancia: tales eran los jueces protectores de extrangeros, esto es, los capitanes generales con su auditor: y entre otros el juez protector del canal de Castilla, que en tal concepto, y con tal amplitud ejercia una y otra jurisdiccion en mas de 400 pueblos.

En cuanto á los verdaderos jueces conservadores, nuestras leyes reencargaban con frecuencia que no embarazasen de ningun mo-

Lorenzo Arrazola

do la accion de la justicia ordinaria, lo cual era restringir mas y mas la de los conservadores.

En un principio el respeto y el prestigio hacian mas que la autoridad; y las conservadurías eran algo mas que un nombre; despues fueron decreciendo en autoridad y atribuciones.

Tal era su estado al final del siglo anterior: despues, como era consiguiente, sistematizado en forma el régimen judicial, establecidos los juzgados de primera instancia, cesaron en un todo los jueces conservadores. (Véanse las leyes 6.ª, 7.ª y 8.ª; tít. 1.º, lib. 2.º, y la 5.ª, tít. 11, lib. 6.º, Nov. Rec.)

CONSERVATORIO DE ARTES. Es un establecimiento público, creado por Real órden de 18 de Agosto de 1824, cuyo objeto es la mejora y adelantamiento de los operarios industriales, tanto en las artes y oficios, como en la agricultura, difundiendo los conocimientos, así téoricos, como prácticos, necesarios para su perfeccion. Se dispuso en la citada Real órden que constara de dos departamentos ó divisiones, situándose en la una el depósito de objetos artísticos, y en la otra un taller de construccion, y que le sirviera de fundamento el antíguo gabinete de máquinas, los modelos y objetos sueltos que existieran en el departamento del fomento y balanza, y cualesquiera otros que perteneciesen á S. M., y no tuviesen aplicacion esclusiva. Para cuidar del órden, buen gobierno, observancia de la instruccion particular, que se daria para el régimen interior del establecimiento y mejoras del mismo, se creó una plaza de director, jefe de todo, cargo puramente honorífico, que deberia recaer en persona celosa y que poseyera nociones de las artes, con el cual se entenderia la superioridad en lo relativo á estos puntos. Debia haber asimismo un encargado del Conservatorio, inteligente en el manejo de las máquinas y que supiera dar razon á quien se la pidiera: otro del taller, que conociera las artes y fuera hábil para construir máquinas; y un secretario que desempeñaria á la vez los cargos de contador y bibliotecario, con otros dependientes, necesarios en un establecimiento de esta clase, para cuyos gastos fijos y eventuales se determinó el medio de allegar los fondos precisos. Se ordenó, por último, á todas las autoridades y corporaciones del Reino, que facilitasen al Real Conservatorio los auxilios que les pidiere, y las noticias y datos que fueran necesarios, para que cumpliera con el importante objeto de su instituto, cual era el adelantamiento de las artes españolas, y que se anunciara al público su establecimiento, para que los empresarios de industria, los artistas, los estudiosos, y cuantos se interesasen en promoverlas, supieran que tenian un centro de comunicacion, á donde dirigirse en este punto.

Los medios con que sucesivamente se fué dotando al Conservatorio de artes para llenar los fines de su institucion, fueron: una biblioteca especial, en que se hallan reunidas las obras mas interesantes, que se han impreso sobre artes, é igualmente las periódicas que se publican: una vasta coleccion de máquinas de agricultura, hilados y otros muchos usos, aplicables en las artes, y diferentes géneros de industria: otra completa coleccion de modelos de máquinas é instrumentos científicos, para el estudio esperimental de las ciencias industriales: otra igualmente de dibujos de construccion y diseños de aparatos, usuales en operaciones químicas, agrícolas y fabriles: enseñanzas gratuitas de geometría, mecánica, física y química, con aplicacion á las artes: una academia gratuita tambien de dibujo, de mecánica y demás objetos de las artes. Se facultó además á todo artesano con casa abierta, para que pudiera dirigirse al director del Conservatorio, haciéndolo desde las provincias, franco de porte, en averiguacion de objetos industriales y artísticos, que pudieran convenirle, sin que por ello se le exigiera estipendio alguno (*Real órden de* 30 *de Mayo de* 1832).

Para estender las noticias y conocimientos de los productos de la industria, y su progresiva mejora en todos conceptos, para estimular á los productores y recompensar honoríficamente á los que sobresalen por sus adelantos en ella, fué establecida la esposicion pública, que se celebra periódicamente en el Conser-

vatorio de artes, y en ella y en los privilegios de invencion é introduccion, que es el medio mas eficaz para premiar á los autores é introductores de máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos y mecánicos, tiene aquel establecimiento la intervencion y atribuciones, que la señalan las instrucciones de 3 de Marzo de 1834: 16 de Julio de 1841 y 4 de Febrero de 1844: Reales decretos de 7 y 27 de Marzo de 1826 y Real órden de 5 de Setiembre de 1834. Por Real decreto de 9 de Mayo de 1839 se dió nueva planta al personal del Conservatorio de artes, con motivo de haberse incorporado á la direccion general de estudios las enseñanzas dependientes del mismo, como parte integrante de la instruccion pública, por Real órden de 20 de Noviembre del año anterior, y con objeto de hacer en él todas las economías compatibles con los fines de su instituto. En su virtud se suprimieron las plazas de director y secretario, y se dispuso que el Conservatorio se compusiera de un catedrático de geometría y mecánica: otro de física: otro de química, y otro de delineacion, que estaría encargado de la direccion del taller, debiéndose nombrar para cada una de estas cátedras un ayudante, capaz de reemplazar al respectivo profesor en sus ausencias y enfermedades. Habria un conserje conservador del edificio y de todos los objetos del Conservatorio, que debería ser persona inteligente en la construccion y uso de las máquinas, y dos porteros, que fueran operarios inteligentes en los artefactos de maderas y metales, para trabajar en el taller todo el tiempo que no estuvieran ocupados en sus respectivas porterías. El gabinete de máquinas y de física; el laboratorio químico; el taller, biblioteca y demás dependencias del Conservatorio quedaban anejos á las cátedras del mismo. Debia ser jefe inmediato del Establecimiento el mas antiguo entre los catedráticos de geometría y mecánica, física y química, bajo la dependencia de la direccion general de estudios; y las funciones da secretario serian desempeñadas por el ayudante mas antiguo de las mencionadas asignaturas, y las de bibliotecario por el mas moderno.

Se disponia asimismo en el mencionado decreto que el gabinete, biblioteca, taller y demás dependencias del Conservatorio, se franquearan al público y siguieran prestando los mismos servicios que hasta entonces, con sujecion á los reglamentos á la sazon vigentes, ó á los que en adelante se establecieran; y que en todo lo relativo á las patentes ó privilegios de invencion é introduccion se entendiera directamente con el ministerio del ramo el decano del Conservatorio, quien en esta parte ejercería las mismas funciones que hasta aquella fecha habian estado concedidas al director; pero que todos los informes que se pidieran sobre esta clase de asuntos, se pasarán al catedrático ó catedráticos, con cuyas asignaturas tuvieran mas conexion, para que espusieran su dictámen, el cual deberia ser discutido en junta de profesores, y con la resolucion de esta, y las observaciones que el decano tuviera por conveniente añadir, se trasmitiera al espresado ministerio. Por último, ha venido á dar su forma actual á la enseñanza del Conservatorio un decreto espedido por el ministerio de Fomento del Gobierno provisional, con fecha 6 de Noviembre de 1868, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Artículo 1.° Se crean en el Conservatorio de artes cuatro cátedras, una de física, aplicada á las artes y oficios: otra de química, aplicada á las artes: otra de mecánica, aplicada á las máquinas más usuales: y otra de economía popular.

»Art. 2.° Estas cátedras serán desempeñadas en el curso actual, sin perjuicio de sacarse á oposicion, por catedráticos escedentes ó por profesores nombrados al efecto, con la gratificacion de 600 escudos, que se cargarán al cap. 18 art. 2.° del presupuesto de Fomento.

»Art. 3.° La matrícula en estas asignaturas será gratuita.

»Art. 4.° Las lecciones se darán de noche, y si en algun caso hubiese necesidad de la luz del dia, el profesor utilizará los domingos.

»Art. 5.° Habrá exámenes públicos de estas asignaturas al fin de curso, estendiéndose á los alumnos aprobados la correspondiente certificacion.

»Art. 6.° En cada cátedra se darán dos premios á los alumnos, precisamente artesanos, mas sobresalientes, uno de 100 escudos, y otro de 50.

»Art. 7.° Disposiciones especiales determinarán la forma de estos exámenes y de las oposiciones á los premios.»

Por la ley de 9 de Setiembre de 1857, artículo 137, se habia tambien dispuesto que hubiera en Madrid una escuela de bellas artes, para los estudios superiores de pintura, escultura y grabado, además de las elementales, otra de agricultura, y un conservatorio de música y declamacion.

CONSERVATORIO DE MUSICA. Estableciόse con objeto de favorecer la enseñanza, fomento y progresos de la música vocal é instrumental. Fué creado por Real órden de 15 de Julio de 1830, encomendando la enseñanza á maestros distinguidos, y dándole una forma semejante á la que tenian otros establecimientos análogos en Europa. Las bases generales de su organizacion fueron aprobadas por Real órden de 14 de Noviembre del mismo año, comunicada por el ministerio de Hacienda al director, nombrado ya, del Conservatorio, á consecuencia de la disposicion soberana que acordó su ereccion, y en ellas se determinaba el establecimiento en la Córte de un Conservatorio Real, con el título de María Cristina, en obsequio de la Reina y bajo su peculiar proteccion, cuyo gobierno, así interior como facultativo, se ejerceria por un director de real nombramiento. Este deberia proponer á la aprobacion de S. M., por conducto del ministerio de Hacienda todo lo concerniente al Real Conservatorio, bien fuera para la variacion ó reemplazo de los maestros y empleados de nombramiento real, bien para los demás puntos, que exigieran resolucion superior. Las plazas que formaban la dotacion del Real Conservatorio, cuyo nombramiento se hacia por S. M. eran: un administrador; un rector espiritual; un maestro de composicion; uno de piano y acompañamiento; uno de violin y viola; uno de solféo; uno de violoncello; uno de contrabajo; uno de flauta, octavin y clarinete; uno de oboé y corno inglés; uno de fagot; uno de trombon; uno de lengua castellana, que seria el secretario de la direccion; uno de lengua italiana; uno de baile; una directora; una subdirectora y una ayudanta para el departamento de alumnas.

Para el auxilio del director y el mas espedito desempeño del instituto, se disponia que el Real Conservatorio constituyera una junta general, compuesta de todos los maestros, que se han designado, y otra facultativa de solos el director, el maestro de composicion, el de piano y el de violin. Las clases de alumnos del Conservatorio debian ser: 1.°, gratuitos de ambos sexos, internos: 2.°, auxiliados de ambos sexos, esternos: 3.°, pensionistas ó contribuyentes de ambos sexos, de toda educacion, internos: 4.°, gratuitos de ambos sexos, de sola educacion facultativa, esternos: 5.°, medios pensionistas, de ambos sexos, de toda educacion, que solo pagaban alimento y equipo, internos: 6.°, contribuyentes de ambos sexos, esternos. Los alumnos de todos los ramos ganaban al fin de su respectiva carrera, en acto formal de oposicion, el título de profesores, discípulos del Real Conservatorio, que les servia de honor y recomendacion en el ejercicio de su arte. Los que salian del Conservatorio, concluida su carrera, debian asistir gratuitamente á la orquesta del mismo, siempre que para ello fueren invitados. A consulta espontánea y unánime de la junta general, y mereciendo la Real aprobacion, podia el Conservatorio obsequiar con el título de *adicto de honor*, á aquellas personas de distinguida gerarquía de ambos sexos, cuya ilustracion, afecto á la música, sin ejecutarla, y carácter benévolo en favor de los establecimientos de instruccion pública, las hiciesen dignas de cooperar con su presencia al lustre del Conservatorio. Podia tambien obsequiar, en virtud de consulta espontánea y unánime de la junta facultativa, con la aprobacion de S. M., con el título de *adicto facultativo*, á las personas de ambos sexos, aficionadas y con conocimientos y mérito sobresaliente en la práctica de la música, las cuales, si querian, podian tomar parte en la orquesta en los conciertos públicos del establecimiento, por el que serian invitados con este objeto.

En la época, que S. M. se dignaba señalar, una vez en cada año, tenia el Conservatorio ejercicio público y concierto, en cuyo acto, al que habian de haber precedido los exámenes y oposiciones secretas, se distribuian los premios que S. M. hubiera mandado dar. Con el fin de promover los mayores progresos en el arte, debia dar tambien el Conservatorio, previa licencia Real, algunos conciertos públicos, no gratuitos, cuando algun profesor ó aficionado español, ó estranjero, solicitaba este honor; pero su concesion debia ser precedida de una prueba privada, bajo las condiciones que establecia el reglamento. Se concedia un concierto público gratuito en el mes de Febrero, y otro en el de Noviembre, á los maestros titulares de capilla sacra, que quisieran hacer oir por ensayo alguna composicion, precisamente nueva, que preparasen para las solemnidades de cuaresma y Navidad.

Los regentes de orquesta y los llamados festeros, podian presentar al Real Conservatorio las partituras que quisieran garantizar con el sello del mismo, para su libre ejecucion en los templos. Era obligacion de todas las empresas de los teatros de España exhibir al Conservatorio, cuando este lo exigiera, la partitura de toda composicion musical, que ya hubieran hecho oir al público, respondiendo el establecimiento de no dar publicidad á las piezas, que para su archivo copiase de dichas partituras, las que serian devueltas sin demora. El autor ó editor de todas las obras de música, que se imprimiesen ó grabasen en España, debia entregar dos ejemplares en el archivo del Real Conservatorio, el cual reuniria cuantas curiosidades musicales, antiguas y modernas, pudieran adquirirse sin inútil profusion, pero con toda la diligencia, que mereciera la presunta utilidad á la gloria, que de su conocimiento pudiera resultar al nombre español en este ramo de saber. Por último, los métodos ó tratados para la enseñanza de cada ramo de la música en el Conservatorio debian ser presentados por cada maestro al director, sin cuya aprobacion no podian usarse.

Tal era la primitiva planta y organizacion de este establecimiento, que desde su instalacion ha sentido las varias vicisitudes de los tiempos, y ha vivido, en alternativas de prosperidad ó decadencia, casi siempre una vida interina y pendiente de arreglo definitivo.

A las enseñanzas de música vocal é instrumental se agregó con posterioridad la de declamacion; y unas y otra, ó sea el negociado del Conservatorio de música y declamacion, que estaba á cargo del ministerio de Comercio, fué agregado al de la Gobernacion del Reino, por Real órden de 22 de Octubre de 1851.

La ley de instruccion pública, de 9 de Setiembre de 1857, consignó en su art. 58 que un reglamento especial determinaría todo lo relativo á las enseñanzas de música vocal ó instrumental y declamacion, establecidas en el Real Conservatorio de Madrid, como asimismo á los estudios preparatorios, matrículas, exámenes, concursos públicos, y espedicion de los títulos propios de estas profesiones: y en el art. 137, que hubiera en Madrid una escuela de Bellas artes para los estudios superiores de pintura, escultura y grabado, además de las elementales, otra de arquitectura y un Conservatorio de música y declamacion.

Parecia ya asegurada la existencia del Conservatorio en la forma y órden gerárquico que, en la vasta escala y múltiples ramos de la instruccion pública, le habia dado dicha ley; pero un Real decreto de 9 de Octubre de 1866 vino á alterarla, disponiendo que las escuelas del notariado, de diplomática, ingenieros industriales y profesores mercantiles, el Real Conservatorio de música y declamacion, las de bellas artes, náutica y veterinaria, dejaran la denominacion de escuelas superiores y profesionales, para tomar la de escuelas especiales, que tenian antes de la ley de 9 de Setiembre de 1857. Mas no pararon aquí las modificaciones introducidas en el Conservatorio, pues en virtud de otro Real decreto de 17 de Junio de 1868, creyéndose que á la sazon ofrecia irregularidades, que debian desaparecer, y siendo, por otra parte, necesario hacer economías en todos los ramos de la administracion pública, se le dió

una nueva organizacion. Segun ella, el Real Conservatorio de música y declamacion seria en lo sucesivo escuela especial de dichas artes, y en tal concepto quedaba sujeto á las prescripciones del Real decreto de 9 de Octubre de 1866; debiendo comprender esta escuela especial las enseñanzas elementales de los estudios superiores, y las aplicaciones mas generales de la música y la declamacion, y dividirse en tres secciones, á saber: música, declamacion general, declamacion lírica.

La seccion de música debia constituirse en la forma siguiente: composicion, canto, armonía, solfeo, lengua italiana, aplicaciones instrumentales.

La de declamacion general, de esta manera: teoría general de la declamacion dramática; historia literaria y artística con relacion al arte dramático, é historia especial del mismo.

La seccion de declamacion lírica comprenderia en una sola asignatura, aplicaciones de la música á la escena.

Disponíase en el mismo decreto que al frente de la escuela hubiera un comisario régio, delegado del Gobierno, el cual tendria á su cargo la inspeccion superior del establecimiento, bajo la dependencia inmediata del director general de instruccion pública, y que á propuesta de dicho funcionario se nombrase un secretario de la clase de profesores, el cual tendria á su cuidado las oficinas, y á sus órdenes los dependientes necesarios. Por último, se mandaba que á la matrícula de las varias enseñanzas de la escuela, así oficiales como libres, fueran admitidos gratuitamente los aspirantes que acreditasen pobreza. Precisamente este decreto, por el cual el Gobierno de S. M. se propuso fijar de una manera definitiva y permanente la situacion, hasta entonces interina y precaria del Conservatorio; fué, entre todos los que mas ó menos profundamente modificaron las condiciones de su primitiva existencia, el que tuvo duracion mas escasa, pues que apenas habrian podido tener principio de ejecucion las prescripciones, encaminadas á la nueva organizacion de dicho establecimiento, cuando fué disuelto en virtud de decreto, espedido por el ministerio de Fomento del Gobierno provisional, con fecha 15 de Diciembre del mismo año 1868, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Artículo 1.° Se declara disuelto el Conservatorio de música y declamacion.

»Art. 2.° Se crea en Madrid una escuela nacional de música.

»Art. 3.° El material y documentos del Conservatorio pasarán á ser propiedad de la nueva escuela de música.

»Art. 4.° En esta escuela se enseñarán las materias siguientes: solfeo, canto, instrumentacion, armonía y composicion.

»Art. 5.° Estas asignaturas serán enseñadas por doce profesores, en la siguiente forma: dos para solfeo, uno para canto, dos para piano, uno para violin y violoncelo, uno para contrabajo, uno para flauta, uno para clarinete y oboé, uno para fagot, uno para armonía y uno para composicion.

»Art. 6.° El director de la escuela será uno de los profesores mas antíguos, nombrado por el Gobierno, con la gratificacion de cuatrocientos escudos anuales.»

CONSIGNACION, CONSIGNAR. Del verbo *consigno*, y este del sustantivo *signum*, señal, marca, distintivo, que diferencia una cosa de otra, y la preposicion comunitiva *cum*, y por tanto, en rigor etimológico, marcar, señalar dos ó mas una misma cosa. Así, en rigor etimológico, consignar seria firmar, sellar dos ó mas una misma cosa; pero el uso ha ampliado y autorizado mas la significacion y la acepcion de la palabra, no siendo idéntica omnímodamente, sino un tanto diversa, en lo judicial, en lo mercantil y en lo rentístico, como se demuestra en estos artículos.

CONSIGNACION (EN LO JUDICIAL). Es el depósito judicial de una cantidad que se adeuda, ó del precio de alguna cosa, cuya adquisicion se pretende. Entre los varios modos, por los cuales se estinguen las obligaciones procedentes de los contratos, es uno, y los autores prácticos lo designan en primer lugar, la paga ó solucion, y la consignacion en su caso. A veces acontece que el acreedor, por motivos particulares, que ge-

neralmente se abstiene de revelar, se niega y rehusa tenazmente admitir el pago de la cantidad que se le adeuda, por ejemplo, el precio de la cosa vendida. En este caso no es justo que la responsabilidad del deudor subsista indefinidamente á merced y capricho del acreedor, y la ley debia venir en su apoyo para salvarle de ella, siempre que se guarden las formalidades y requisitos que la misma prescribe. El derecho romano reconoció la oferta y consignacion, *oblatio et consignatio*, como medio legítimo de estinguir las obligaciones, y la definió diciendo que era un modo de suprimirse la obligacion, si el deudor sella y deposita judicialmente todo el dinero, que en su justo lugar y tiempo ha ofrecido al acreedor, y que éste no ha aceptado. Requeríase, por tanto, que el deudor ofreciera todo el dinero, en el tiempo y lugar que correspondiera, citándose al acreedor por el juez para que lo viera depositar y sellar, despues de haberse contado á su presencia y la del mismo juez, registrándose en las actas la cantidad depositada. Verificada en esta forma y con tales solemnidades la consignacion, producia los efectos siguientes: 1.°, que el acreedor quedaba libre de toda obligacion, de la misma manera que si hubiese pagado: 2.°, que desde el momento en que se hacia la consignacion, dejaba de devengar intereses el capital; 3.°, que el daño, quebranto ó pérdida del capital era de cuenta y cargo del acreedor (ley 19, Cód., *De ussur*: ley 9, id., *De solut*).

Nuestro derecho pátrio admitió la misma doctrina, y en razon de ello dice la ley 8.ª, tít. 14, Part. 5.ª: «Otrosí, decimos, que si el debdor quisiese pagar el debdo al que lo debiese recebir, é el otro non gelo quisiese tomar; debe facer afrenta ante omes buenos, en logar, en tiempo guisado, mostrando los maravedís, de como quiere facer la paga. E debe poner aquellos maravedís señalados en fieldad de algund ome bueno, ó en la sacristanía de alguna eglesia: é dende adelante es quito del debdo, é non ha el otro demanda ninguna contra él. E aun decimos que si los maravedís se perdiesen sin culpa del debdor, despues que fuesen puestos en fieldad, así como sobredicho es, que el daño pertenece al señor del debdo tan solamente: porque fue en culpa, que lo non quiso recebir, cuando gelo quiso pagar.»

Segun esta ley, puede hacerse la consignacion de dos modos, á saber: ofreciendo el deudor lo que debe al acreedor, á presencia de hombres buenos, en lugar y tiempo oportuno; ó bien haciendo esta misma oferta ante el juez competente, y verificando enseguida, con su aprobacion, el depósito. Este último es el modo recibido en la práctica y conforme, aunque no espresado en la ley, á su espíritu y á los principios generales de derecho, segun los cuales lo que rige y se observa en materia de consignaciones, para que produzcan el efecto de estinguir la obligacion de deudor, es: que se hagan de la totalidad, y no de parte de la deuda; que la persona que haga la consignacion, así como aquella á quien se destina la cantidad consignada, tengan respectivamente capacidad, esto es, la primera para pagar, y para cobrar la segunda; que la consignacion se haga en el lugar que se hubiere convenido, y si nada se hubiere determinado en el contrato con referencia á este particular, en el lugar del domicilio del acreedor, ó en el que establezca la ley ó la costumbre, que haya vencido el plazo; y que si medió condicion en el contrato, se haya verificado ó cumplido aquella.

Como que el depósito debe ser un hecho real y efectivo, se dará aviso al acreedor, del dia, hora y lugar, en que va á verificarse, y si no compareciere, se le hará saber despues el dia, hora y lugar en que tuvo efecto, con el fin de que pueda recojer la cantidad depositada (*Cur. Filip.*, lib. 2, *Com. terr.*, capítulo 7, número 26). Así la ley de Partida, que hemos citado, como la mayor parte de los autores, que comentan y desenvuelven su doctrina, circunscriben la consignacion al caso de que, lo que se adeuda sea dinero. Otros, sin embargo, la hacen estensiva á especies distintas, bajo el nombre genérico de *cosa*, y en este sentido la hallamos mas conforme á su naturaleza, como uno de los modos comunes de estinguir las obligaciones.

El proyecto de Código civil está esplícito y

terminante, así en este, como en los demás puntos que abraza la materia de que tratamos. En la seccion primera del cap. 5.°, título 5.°, del libro 3.°, habla de la estincion de las obligaciones, y despues de sentar en el art. 1086, que estas se estinguen por el mútuo consentimiento de las partes contrayentes, añade, que se estinguen tambien, en primer lugar, por el pago ó cumplimiento, de cuya naturaleza, y del lugar en que debe ejecutarse, trata en la seccion segunda; y en el párrafo 5.° de la misma, del ofrecimiento del pago y de la consignacion, en estos términos:

»Art. 1107. Si el acreedor rehusase admitir la cosa ó cantidad debida, puede el deudor estinguir su obligacion por medio del ofrecimiento y de la consignacion, que deberá hacerse, en la forma que se prescribe en los artículos siguientes.

»Art. 1108. Para que el ofrecimiento produzca efecto, es necesario: 1.°, que se haga por persona legítima para hacer el pago, y á quien tenga derecho para recibirlo: 2.°, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible, con sus intereses ó réditos reunidos, si los hubiere: 3.°, que esté cumplida la condicion, si la obligacion fuere condicional; ó vencido el plazo, si se estipuló en favor del acreedor: 4.°, que el ofrecimiento sea de cumplir la obligacion en la forma que se prescribe en los párrafos 1.° y 2.° de esta seccion; y 5.°, que el ofrecimiento se haga por ante escribano público y dos testigos.»

»Art. 1109. El ofrecimiento seguido de la consignacion, pone la cosa á riesgo del acreedor, y surte los demás efectos de verdadero pago.

»Art. 1110. El escribano estenderá un testimonio en su protocolo, y se darán á la parte interesada los traslados que pidiere.

»Art. 1111. Con el testimonio, de que habla el precedente artículo, se ofrecerá la consignacion ante el juez del partido, que mandará hacerla en uno de los bancos públicos autorizados por el Gobierno, si consiste en dinero; ó en poder de un depositario, si consistiere en otra cosa.

»Art. 1112. Hecha la consignacion, deberá notificarse al acreedor.

»Art. 1113. Los gastos, que ocasione el ofrecimiento del pago y su consignacion, son de cargo del acreedor, siempre que se hubieren llenado los requisitos que se han espresado.

»Art. 1114. Hecha la consignacion, se mandará dar al deudor testimonio de ella, si lo pidiere. Podrá tambien el deudor pedir al juez que declare bien hecho el ofrecimiento y la consignacion, y mande cancelar la obligacion. Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignacion, ó no hubiere recaido la declaracion judicial de que se trata en el párrafo anterior, podrá el deudor retirar la cosa ó cantidad consignada: y en este caso queda subsistente la obligacion, como si no se hubiera hecho el ofrecimiento y consignacion.

»Art. 1115. Despues de haberse hecho la declaracion judicial, no podrá retirarse la cosa ó cantidad consignada sin el consentimiento del acreedor. Si se retirara con su consentimiento, perderá toda preferencia ó derecho hipotecario que tuviere sobre la misma cosa, y los co-deudores y fiadores que darán libres.»

Hemos dicho, al definir la consignacion, que se entiende tambien por ella el depósito judicial del precio de alguna cosa, cuya adquisicion se pretende, y en esta parte nos referimos especialmente á los retractos en general. El que tiene derecho de retraer, bien se trate del retracto gentilicio, bien del de sociedad ó comunion, y como una de las clases en que este se divide, del que pueden intentar el señor del dominio directo, el superficiario y el enfitéuta respectivamente, está en el deber de practicar algunas solemnidades, cuya omision seria causa suficiente para que perdiera su derecho. Una de ellas es pagar el mismo precio, en que se efectuó la venta, y no menos, sea grande ó pequeño, pues no basta el ofrecerlo solamente, y si no se quisiere recibir el precio, depositarlo judicialmente, y siendo posible, á presencia del juez y de su órden. Si la venta se hubiere hecho al fiado, deberá afianzar el que retrae que satisfará su importe al tiempo, en que el comprador estaba obligado. Debe hacerse con

rigor tal, el pago ó consignacion del precio, y con tanta formalidad, que ha de constar su enumeracion real y efectiva, sin que sea bastante que el depositario confiese haberlo recibido; y si faltase alguna cantidad, por insignificante que fuese, viciaría el acto, á no ser que procediera de ignorancia ó error de cálculo, en cuyo caso habria lugar á subsanarlo. Si el retrayente no supiere con certeza el precio, deberá ofrecer y depositar el que le pareciere serlo, dando fiadores de que pagará el esceso, si resultare haberlo. Además del precio, deberá consignarse, en su caso y sabiéndose la cantidad, el importe de las espensas, tributos y gabelas que hubiere satisfecho el comprador, supliéndose, en el caso de ser ignorado, por los medios que hemos indicado al hablar del precio.

En la consignacion, tratándose del retracto de comunion ó sociedad, cabe la compensacion, cuando el retrayente tiene algun crédito contra el comprador: pero no tiene lugar en el gentilicio, en el que se ha de verificar aquella, en los términos que dejamos espuestos; aunque si el retrayente tuviere algun crédito contra el comprador podrá, al hacer el depósito de la totalidad del precio, cumpliendo con el precepto legal, pedir que no se le entregue la cantidad líquida que resulte deberle (leyes 2.ª, 4.ª y 6.ª, tít. 13, lib. 10, Novis.).

La ley de Enjuiciamiento civil enumera la consignacion del precio entre los requisitos indispensables para dar lugar á las demandas de retracto, y en prueba de que la exije en todos indistintamente, sobre lo cual podria haber alguna duda, atendidos los términos de redaccion de las leyes de nuestros antiguos códigos, que tratan de esta materia, y la oscuridad ó ambigüedad con que sobre el particular se esplican algunos autores al esponer su doctrina, citaremos el artículo 674 de aquella, cuyo contesto es:

«Para que pueda darse curso á las demandas de retracto, se requiere: 1.º, que se interpongan en juzgado competente, dentro de nueve dias, contados desde el otorgamiento de la escritura de venta: 2.º, que se consigne el precio, si es conocido, ó si no lo fuese, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea: 3.º, que se acompañe alguna justificacion, aun cuando no sea cumplida, del título en que se funde el retracto: 4.º, que se contraiga, si el retracto es gentilicio, el compromiso de conservar la finca retraida á lo menos dos años, á no ser que alguna desgracia hiciere venir á menos fortuna al retrayente y lo obligare á la venta: 5.º, que se comprometa el comunero á no vender la participacion del dominio que retraiga, durante cuatro años: 6.º, que se contraiga, si el retracto lo intenta el dueño directo ó el útil, el compromiso de no separar ambos dominios durante seis años; y 7.º, que se acompañe copia de la demanda en papel comun.

La consignacion, como medio de estinguir las obligaciones en defecto del pago, está admitida en los códigos de otras naciones, si bien no en todos se halla establecida de la misma manera; pues en algunos se sienta el principio, cuyo desenvolvimiento viene despues á ser objeto de ordenanzas especiales, y en otros se halla el principio y la forma de su aplicacion en el código mismo, como lo hemos visto en los artículos preinsertos de nuestro proyecto de Código civil. Así se establece tambien en el código civil francés, cuyas prescripciones sobre este particular se contienen en los artículos siguientes.

»Art. 1257. Cuando el acreedor rehusa recibir su paga, puede el deudor hacerle ofrecimiento real de lo que debe; y si aun entonces no quisiese admitirlo, consignar el dinero ó la cosa ofrecida. La consignacion debida á los ofrecimientos reales, deja libre al deudor; equivale por lo que á él hace á una verdadera paga, cuando se ha hecho legítimamente, y la cosa consignada de este modo queda ya de cuenta del acreedor.

»Art. 1258. Para que los ofrecimientos reales sean válidos, es preciso: 1.º, que se hayan hecho al acreedor, que tenga facultades para recibir, ó al que tenga poder bastante para recibir por él: 2.º, que sean hechos por persona capaz ó hábil para pagar: 3.º, que sean de toda la cantidad que se debe de las rentas caidas ó intereses devengados, de los gastos liquidados, y de una cantidad á cuenta

de los que aun estén por liquidar, sin perjuicio de lo que resulte de su liquidacion: 4.°, que haya llegado el plazo, si se estipuló este en favor del acreedor: 5.°, que se haya verificado la condicion bajo la que se contrajo la deuda: 6.°, que los ofrecimientos se hayan hecho en el lugar pactado para el pago; y si no hubiere pacto especial respecto del lugar del pago, que se hagan ó á la persona misma del acreedor, ó en su domicilio, ó en el domicilio elegido para el cumplimiento del pacto; y 7.°, que se hagan los ofrecimientos por un ministro de justicia, que tenga el carácter conveniente para tales actos.

»Art. 1259. Para la validez de la consignacion no es necesario que el juez la haya autorizado. Se necesita: 1.°, que haya sido precedida de una notificacion al acreedor, noticiándole el dia, hora y lugar en que se depositará la cosa ofrecida: 2.°, que el deudor se haya desprendido de la cosa que ofreció, entregándola, juntamente con los intereses reunidos, hasta aquel dia, en el lugar señalado por la ley para recibir las consignaciones: 3.°, que se haya formado por el ministro de justicia acta que esplique la naturaleza de las especies ofrecidas, que se negó el acreedor á recibirlas, ó que no compareció; y por último, del depósito de ellas: 4.°, que en caso de no haber comparecido el acreedor, se le haya notificado la sumaria del depósito, intimándole que recoja la cosa depositada.

»Art. 1260. Los gastos de los ofrecimientos reales y de la consignacion serán de cuenta del acreedor, si son válidos.

»Art. 1261. Mientras que el acreedor no haya aceptado la consignacion, el deudor puede recojerla: y si la recogió, no quedan sus co-deudores y fiadores libres de la obligacion.

»Art. 1262. Cuando el deudor ha obtenido por sí mismo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en que se declararon buenos y legítimos sus ofrecimientos y su consignacion, no puede ya, ni aun con el consentimiento de su acreedor, recoger su consignacion, en perjuicio de sus co-deudores ó de sus fiadores.

»Art. 1265. El acreedor que consintió que su deudor recogiese la consignacion, despues que por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se declaró válida, no puede ya usar para la paga de aquel crédito de los privilegios ó hipotecas que antes tuviese: no tiene ya hipoteca, sino desde el dia en que el acta, por la cual consintió que se retirase la consignacion, se haya revestido de las solemnidades necesarias para producir la hipoteca.

»Art. 1264. Si la cosa debida es un cuerpo cierto, que debe ser entregado en el lugar en que se encuentra, debe el deudor intimar al acreedor que lo recoja, por medio de acta formal notificada en su persona, ó en su domicilio, ó en el elegido para el cumplimiento del pacto. Hecha esta intimacion, si el acreedor no recoje la cosa y el deudor necesita el sitio donde está colocada, puede obtener de la justicia permiso para depositarla en alguna otra parte.»

CONSIGNACION (EN LO MERCANTIL). Es el depósito que se hace en poder de persona de garantía, de dinero, billetes ó papeles de importancia, de mercaderías y otra clase de efectos, bien sea por mandato judicial, ó bien voluntariamente, para su remision ó conduccion á las personas á quienes pertenecen, ó á los parajes para los cuales están destinadas.

Por lo que respecta á la consignacion, como medio de estinguir las obligaciones, no siendo la ley mercantil, en realidad, mas que una ley escepcional, y el Código de Comercio, por tanto, la compilacion de las reglas relativas á los contratos y negociaciones de los comerciantes, todos los casos que no están previstos en él, se resuelven por las reglas del derecho comun, que es la fuente de que emanan los principios generales de la equidad y de la justicia. Así que, la doctrina establecida sobre esta materia por el derecho civil es aplicable á los contratos y obligaciones mercantiles, en todo lo que no se halle espresamente prevenido por la ley especial, con las modificaciones consiguientes á la naturaleza peculiar de los negocios de comercio, y á las formas prescritas por la ley de Enjuiciamiento, en sus respectivos casos: á que se ha de allegar ahora la unifi-

cacion de fueros, y la supresion por tanto del de comercio, en la forma que se previene.

En cuanto á la consignacion en sentido mercantil estricto, que es el depósito en mano segura de dinero, mercancías y otra clase de efectos, hecho voluntariamente para ser remitidos á personas determinadas, tiene lugar y puede decirse que es la base de la mayor parte de las operaciones del comercio terrestre y marítimo. Es un acto que produce obligaciones recíprocas entre el comitente, consignador ó cargador, que es el que envía las mercaderías, el porteador ó capitan de nave, que son los encargados de conducirlas á su destino, y el consignatario, que es la persona á quien van dirigidas.

El Código de Comercio no consagra un capítulo ó seccion particular á la consignacion mercantil, como lo hacen los códigos modernos, con respecto á la consignacion civil, como medio de estinguir las obligaciones, concretando y determinando su forma y sus condiciones esenciales. Una y otras aparecen en dicho Código en las secciones correspondientes á comisionistas, porteadores, capitanes de naves y trasporte marítimo.

Reservando á cada uno de los artículos de la ENCICLOPEDIA, que tratan estas materias, la esposicion y desenvolvimiento de toda la doctrina concerniente á las mismas, nos limitaremos en éste á reseñar, de las disposiciones del Código de Comercio, por el órden con que están colocadas, todas aquellas que conduzcan al propósito de fijar la idea de la consignacion mercantil, y de las obligaciones que emanan de esta operacion especial del comercio.

El comerciante, que confiere á un comisionista la comision para vender, le consigna y remite los géneros, cuya enajenacion le encomienda, y éste, que es libre de aceptar ó no aceptar el encargo, si lo rehusa, debe, no obstante, procurar la conservacion de aquellos, dando aviso de su negativa al comitente, para que nombre nuevo encargado; y no verificándolo, está autorizado para reclamar del tribunal de comercio el depósito de los efectos recibidos, y tambien la venta de los que sean necesarios para indemnizarse de los gastos que se le hubiesen causado con motivo de su recibo y conservacion. El mismo derecho le asiste, si el presunto valor de los efectos consignados no es suficiente á cubrir los desembolsos, que haya hecho por el trasporte y recibo de ellos, en cuyo caso se acuerda el depósito desde luego, y se procede á la venta, prévio juicio instructivo con audiencia de los interesados. Al entregarse de los efectos, que le han sido consignados, debe examinar, con presencia de las cartas de portes y fletamentos, si son los mismos que le han sido anunciados, si están bien acondicionados, ó si han sufrido en el camino algun deterioro ó avería, porque de ser así, debe hacerlo constar inmediatamente en forma legal, poniéndolo sin dilacion en noticia del comitente, en el concepto de que la omision de estos requisitos le haria responsable de las mercaderías, segun le fueron consignadas y resulten de las cartas de portes. Debe conservar los géneros recibidos por cuenta agena, en los términos que los recibió, á no ser que su destruccion ó menoscabo procedan de caso fortuito, ó del trascurso del tiempo, ó bien de vicio inherente á la naturaleza de los mismos; y cuando quiera que resulten perjudicialmente alterados, sea cual fuere el origen de la alteracion, debe hacerla constar desde luego en forma legal y fehaciente.

Si el comisionista, encargado de vender, tiene efectos de una misma especie, pertenecientes á diferentes dueños, debe, para evitar confusion, señalarlos por medio de contramarcas, practicando la misma diligencia, cuando en una misma negociacion van comprendidos efectos de distintos comitentes, ó de estos y del comisionista. En el caso de que por su culpa pereciesen ó se deteriorasen las mercaderías, que para su venta le fueron consignadas, responderá de su pago al comitente, computándose su valor por el precio justo que tuvieren aquel dia en la plaza. Los efectos, remitidos en consignacion de una plaza á otra, están obligados especialmente al pago de las anticipaciones hechas por el consignatario á cuenta de su valor y producto, como tambien al de los gastos de conduccion ó trasporte, recepcion, conservacion y demás

irrogaciones legítimas, y al derecho de comision.

El comisionista, por tanto, no puede ser privado de la posesion de ellos, sin que se le reembolse préviamente del derecho de comision y de todos los gastos de esta clase, en razon de los cuales tiene preferencia sobre todos los acreedores del comitente. Pero, para gozar de esta preferencia, es condicion precisa que estén los efectos en poder ó á disposicion del consignatario, ó que, habiéndose espedido á su direccion, haya recibido este un duplicado auténtico del conocimiento ó carta de porte, firmado por el conductor ó comisionado, encargado del trasporte. Las anticipaciones, que se hayan hecho sobre géneros consignados por una persona residente en el mismo domicilio del comisionista, se consideran como préstamos con prenda, y no van comprendidos en las disposiciones anteriores.

Habiendo ya espuesto los deberes y obligaciones del comisionista, investido de la comision especial para vender, como consignatario ó receptor de las mercaderías destinadas á la venta, indicaremos las del comitente en esta operacion. Está obligado este á satisfacer al comisionista una retribucion conforme á lo estipulado, y á falta de estipulacion, segun el uso de la plaza. Si el comitente reforma, modifica ó revoca la comision, lo cual está en sus facultades, debe retribuir al comisionista, á proporcion de las cantidades invertidas hasta el dia de la revocacion; y está asimismo obligado, á no haber precedido pacto espreso en contrario, á satisfacer sin dilacion el importe de los gastos y desembolsos, que haya hecho el comisionista para evacuar su encargo; y si hubiera demora en el pago, puede exigir éste el interés de la cantidad desembolsada, siempre que él no haya sido moroso en rendir la cuenta. Por último, en la consignacion procedente de la comision para vender, así como en todas las demás que median entre el comitente y el comisionista, en cuanto no se oponga á las disposiciones prescritas en el Código de Comercio, ó no se encuentre determinado por ellas, se arreglarán uno y otro á las reglas generales del derecho comun sobre el mandato (arts. 120, 121, 122, 137, 138, 143, 147, 148, 149, 150, 164, 165, 169, 170 y 171 del Cód. de Com.).

Otro de los agentes del comercio, á quien por razon de su oficio incumbe intervenir en la consignacion mercantil, es el porteador, el cual recibe los efectos, cuya conduccion se le encarga, y los trasporta de un punto á otro, bien sea por tierra, ó por rios y canales. Al recibirlos, contrae la obligacion de entregarlos á la persona á quien van dirigidos, sin demora y sin examinar su derecho, en el mismo estado, en que aparezca haberlos recibido, segun la carta de porte, la cual es el título legal del contrato entre el cargador y el porteador. Son de cargo de éste los desfalcos y menoscabos, con arreglo al valor que debieran tener los efectos en el punto y época en que debia verificarse su entrega, computándose su estimacion por el valor, que tuvieren designado en la carta de porte, fuera de aquellos que el porteador pruebe en forma legal y ordinaria haber ocurrido por caso fortuito inevitable, violencia insuperable, ó por la naturaleza y vicio propio de los mismos géneros; en cuyo caso los daños y deterioros serán de cuenta del propietario. Tiene además el deber de realizar la entrega en el plazo convenido; y si sucediere que el consignatario no se halla en su domicilio, ó que rehusa recibir los géneros, se ha de proveer su depósito por el juez local á disposicion del cargador ó remitente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

La órden dada por el cargador para variar de consignacion, mientras los efectos estuvieren en camino, debe ser cumplida por el porteador, con tal que el cargador le devuelva en el acto el duplicado de la carta de porte. Hemos dicho que este documento es el título legal del contrato entre el cargador y el porteador, y es tambien el modo formal de hacer la consignacion en el comercio terrestre. La carta de porte debe contener: 1.°, los nombres, apellidos y domicilios del cargador, del porteador y de la persona á quien van consignadas las mercaderías: 2.°, la fecha de la espedicion, el lugar de la entrega, plazo para verificarla y la designacion especial de las mercaderías, con espresion de su calidad,

de su peso y de las marcas: 3.°, el precio que se ha de dar por el porte; y 4.° la indemnizacion que, en caso de demora, ha de abonar el porteador, si hubiere mediado algun pacto.

Si al variar la consignacion, estando aun los efectos en camino, la nuevamente designada exige variacion de ruta ó que se prolongue la primera, se ha de fijar de comun acuerdo la alteracion en el precio de los portes; y si así no se hiciere, solo tendrá el porteador que cumplir su primera obligacion.

El trasporte debe hacerlo el porteador por el camino, en que se hubiere convenido con el cargador; y si lo variare, quedará responsable de la indemnizacion de los daños, que pudieran sobrevenir, y de la pena convencional que se hubiere pactado. Si sobre este estremo no hubiere mediado pacto, tiene libertad para optar por el camino que mejor le pareciere, siempre que se dirija vía recta al punto, en que ha de hacer la entrega. El porteador responde de las averías, que sufran los géneros durante su trasporte, cuando procedan de la falta de cumplimiento á las obligaciones que dejamos indicadas, y tambien de las causadas por caso fortuito ó vicio de la cosa, si á ellas ha dado motivo su imprecaucion ó negligencia. Mas esta responsabilidad desapareceria, si en la carta de porte se hubiera cometido engaño, atribuyendo á las mercaderías calidad distinta de la que realmente tenian.

Los efectos trasportados pueden haber quedado inútiles por razon de la avería, ó haber esperimentado solamente alguna depreciacion. En el primer caso, el consignatario puede negarse á recibirlos, exigiendo del porteador su valor, conforme al precio corriente en aquel dia, aunque no podrá rehusar los que se hallen ilesos, recibiendo estos y dejando los deteriorados por cuenta del porteador. Cuando el efecto de las averías sea solo una disminucion en el valor del género, se reducirá la obligacion del porteador á abonar lo que importe este menoscabo, á juicio de peritos.

Tambien es responsable el porteador de los perjuicios, que se originen por su omision en cumplir lo preceptuado por las leyes fiscales, á no ser que se haya atemperado á órdenes formales del cargador ó consignatario, sin perjuicio de las penas corporales ó pecuniarias, en que ambos hayan incurrido, con arreglo á derecho.

El plazo para hacer la reclamacion sobre el estado, en que se hallen las mercaderías, es el de 24 horas, contadas desde su recibo, siempre que por la parte esterior de los bultos no se conociesen las señales del daño ó avería, y pasado este término ó pagados los portes, cesa el derecho de reclamacion. Si entre el consignatario y el porteador se promovieren dudas sobre este particular, ó sea acerca del estado de los géneros, deben ser reconocidos por peritos nombrados amigablemente por las partes, y en su defecto por el juez; y si las partes no se conforman con el resultado de este reconocimiento, consignado por escrito, se procede al depósito de los géneros en almacen seguro, reservándose á cada uno el derecho de que se crea asistido, para que haga uso de él como corresponda.

La responsabilidad del porteador empieza desde el momento, en que por sí ó por persona destinada al efecto, recibe las mercaderías, y para poderla hacer efectiva en su caso, están obligados especialmente, como hipoteca de los efectos entregados al porteador, las bestias, carruajes, barcos, aparejos y todos los demás instrumentos principales y accesorios del trasporte. Por el contenido de la carta de porte se decidirán las contestaciones, que ocurrieren entre el cargador y el porteador sobre la ejecucion y cumplimiento del contrato, sin admitirse mas escepciones en contrario, que las de falsedad y error involuntario en su redaccion. Pero á veces no se estiende este documento, porque el hacerlo, ó no, es potestativo en ambas partes contratantes; y entonces hay que decidir las cuestiones segun otras pruebas jurídicas, estando ante todo obligado el cargador á probar que entregó los efectos, en caso de que el porteador lo negare. Si se estendió carta de porte, el porteador recoje la original, y el cargador puede exijirle un duplicado firmado por él. Cumplido el contrato, se canjean ambos títulos, y se tienen por canceladas sus obligaciones y acciones respectivas. Si por cualquier causa legítima no pu-

diera devolverse al porteador el duplicado de la carta, se le dará recibo de los efectos que haya entregado.

Esplicadas ya las mútuas obligaciones del cargador y porteador, segun las disposiciones especiales de la legislacion mercantil y sin perjuicio de las que en los contratos ordinarios del comercio sancionan los principios y reglas generales, que prescribe el derecho comun, nos resta hablar de las que afectan al consignatario. Es una de las primeras la de pagar el porte de los géneros, que le han sido consignados, en el término de veinticuatro horas desde su entrega, si no hiciere alguna reclamacion sobre desfalco ó avería. Pasado este término, el porteador puede exigir que se vendan judicialmente géneros en cantidad suficiente á pagar su trasporte y los gastos que haya suplido. Por tanto, los efectos conducidos están especialmente hipotecados en favor del porteador, y este derecho se trasmite sucesivamente de uno á otro, hasta llegar al último que verificare la entrega. Sin embargo, cesa este privilegio, cuando, pasados tres dias sin reclamar su derecho el porteador, adquiere los efectos un tercero; y tambien, aun permaneciendo estos en poder del consignatario, si ha trascurrido ya un mes desde la entrega, sin haber propuesto reclamacion.

La quiebra del consignatario no interrumpe el derecho del porteador, siempre que lo reclame dentro del mes siguiente al dia de la entrega. De este modo queda realizado el acto de la consignacion en el comercio terrestre, pues las demás obligaciones del consignatario en razon de los efectos recibidos son consecuencia del contrato particular, en cuya virtud le fueron remitidos (seccion 4.ª, título 3.º, lib. 4.º Cód. de Com.).

En el comercio marítimo la consignacion se hace por medio del *conocimiento*, que es un escrito que comprende la enumeracion de las mercaderías entregadas por el cargador á bordo de la nave para su trasporte. En los puertos del Mediterráneo se le da el nombre de *póliza de cargamento*. El conocimiento, que es el título de las obligaciones respectivas del capitan y del cargador de la nave, debe espresar: 1.º, el nombre, matrícula y porte del buque: 2.º, el del capitan y el pueblo de su domicilio: 3.º, el puerto de la carga y el de la descarga: 4.º, los nombres del cargador y del consignatario: 5.º, la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías; y 6.º, el flete y la capa contratados.

Se puede omitir el nombre del consignatario, si el conocimiento es á la órden. Ni el cargador ni el capitan pueden rehusar la entrega mútua de este documento, debiendo firmar el capitan cuantos conocimientos exija el cargador. Se hacen tambien los conocimientos á la órden, y pueden cederse y negociarse por endoso todos los derechos y acciones del endosante sobre el cargamento. Los conocimientos han de ser todos de un mismo tenor, deben llevar igual fecha y espresar el número de los que se han firmado. Falleciendo el capitan de la nave, ó cesando en su oficio por cualquier otro accidente, antes de hacerse la nave á la vela, deben pedir los cargadores que el sucesor revalide los conocimientos suscritos por el que recibió la carga, sin lo cual no responderá aquel sino de lo que se justifique por el cargador que existia en la nave cuando entró á ejercer su empleo; pero los gastos, que puedan ocurrir en el reconocimiento de la carga embarcada, serán de cuenta del naviero, sin perjuicio de que los repita del capitan cesante, si dejó de serlo por culpa que hubiere dado lugar á su remocion.

Las demandas entre el cargador y el capitan se han de apoyar necesariamente en el conocimiento de la carga entregada á este, sin cuya presentacion no se les deberá dar curso; y los conocimientos, cuya firma sea reconocida legítima por el que los suscribió, tienen fuerza ejecutiva, en tal manera, que no se admitirá á los capitanes la escepcion de que los firmaron confidencialmente y bajo promesa de que se les entregaria la carga designada en ellos. Habiendo discordancia entre los conocimientos de un mismo cargamento, se decide por el que presente el capitan, siempre que en su totalidad, ó al menos en la parte que no sea impresa, esté escrito de mano del cargador ó del dependiente propuesto

para las espediciones de su tráfico, sin enmienda ni raspaduras, y por el que presente el cargador si estuviere firmado de mano del mismo capitan. Si ambos conocimientos discordes tienen respectivamente este requisito, se estará á lo que prueben las partes.

El destino de las mercaderías no puede variarse sin que el cargador devuelva al capitan todos los conocimientos que éste firmó, bien sea que se hayan dado á la órden, ú otorgado en favor de persona determinada; y si el capitan consintiere en ello, es responsable del cargamento al portador legítimo de los conocimientos. Si hubieren padecido estravío, no pudiéndose por este motivo hacer la devolucion, se afianzará á satisfaccion del capitan el valor del cargamento, sin cuyo requisito no se le puede compeler á suscribir nuevos conocimientos para distinta consignacion. El portador legítimo de un conocimiento á la órden, que no le presentare al capitan del buque antes de empezarse la descarga para que se le entreguen directamente las mercaderías, está obligado á satisfacer los gastos que se causen en almacenarlas y la comision del medio por ciento, á que tendrá derecho el depositario de ellas; y al hacer la entrega del cargamento, se han de devolver al capitan los conocimientos que firmó, ó al menos uno de los ejemplares, en que se pondrá el recibo de lo que hubiere entregado. El consignatario que fuere moroso en dar este documento, responderá al capitan de los perjuicios que por esta causa se le sigan. Por virtud del conocimiento del cargamento, se tienen por cancelados los recibos provisionales de fecha anterior, dados por el capitan ó sus subalternos, de las entregas parciales, que se les hubieren ido haciendo (§. 2.°, seccion 1.ª, tít. 3.°, lib. 3.° Cód. de Com.) Véase aun **CONOCIMIENTO** *(en lo mercantil.)*

Aunque digimos antes que haríamos una reseña de las disposiciones del Código ajustándonos al órden de su colocacion, nos ha parecido oportuno anteponer las referentes al conocimiento á las demás que tienen relacion con el trasporte marítimo, porque, siendo este documento un equivalente de la carta de porte en el comercio terrestre, de él, así como de este, provienen los datos, que tienden á fijar la naturaleza de la consignacion mercantil. Veamos, ahora, con respecto al cargamento, sobre que versa esta, los deberes del capitan, que lo conduce en la nave de su mando.

Es obligacion suya, al llegar al puerto de su destino, entregar el cargamento, prévios los permisos de las oficinas de marina y aduanas, á los respectivos consignatarios, sin desfalco alguno, y con las creces que haya durante su estancia en la nave, bajo su propia responsabilidad y la del buque y sus aparejos y fletes. Cuando ignorase á quién habia de hacer la entrega, por estar ausente el consignatario, ó por no presentarse portador legítimo de los conocimientos á la órden, deberá poner el cargamento á disposicion del tribunal de comercio, ó en su defecto, de la autoridad local, para que acuerden lo que proceda y estimen conveniente.

La responsabilidad del capitan empieza, desde que se le hace la entrega del cargamento á la orilla del agua, ó en el muelle del puerto donde se carga, hasta que lo pone en la ribera ó muelle del puerto, adonde vá destinado, á no ser que se hubiese pactado otra cosa espresamente, ó si no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar la carga á bordo, ó recibirla del mismo modo.

Es responsable el capitan de los gastos y perjuicios irrogados á los cargadores, por haber entrado voluntariamente en puerto distinto del de su destino, ó por culpa, negligencia é impericia suya; pero cesa esta responsabilidad, cuando los daños en el cargamento consignado han ocurrido por fuerza insuperable, ó por caso fortuito inevitable, siempre que no haya intervenido dolo.

Debe el capitan llevar un asiento formal de los géneros que entrega, con sus marcas, números y espresion de la cantidad, trasladándolos al libro de cargamentos, y es responsable de las pérdidas y confiscacion por contravenciones á las leyes y reglamentos de aduanas, ó de policía de los puertos (artículos 672 al 678 y 681 al 683, Cód. de Com.).

Mas no siendo el capitan de la nave mas que el jefe de ella, nombrado y asalariado por el naviero, segun contrata, y por tanto, concre-

tándonos á la consignacion, el nuevo conductor de los efectos consignados, habremos de buscar en los contratos de fletamento las demás disposiciones, que vengan á completar el conocimiento de aquel acto por lo que respecta al comercio marítimo, en lo que no sea bastante á dar de él una idea acabada lo que dejamos espuesto sobre el conocimiento.

El fletamento es un contrato por el cual se alquila una nave, total ó parcialmente, para determinado uso y mediante cierto precio, que se llama flete. Para que este contrato tenga validez en juicio es necesario que esté redactado por escrito en una póliza firmada por los contratantes. Esta escritura debe contener los particulares siguientes: 1.°, la clase, nombre y porte del buque: 2.°, su pabellon y puerto de su matrícula: 3.°, el nombre, apellido y domicilio del capitan, y del naviero, si éste fuere quien contratare el fletamento: 4.°, el nombre, apellido y domicilio del fletador, y el del comitente si obrase por comision: 5.°, el puerto de carga y el de descarga, y los dias convenidos para verificarla: 6.°, las estadias y sobre-estadias que habrán de contarse pasados aquellos, y lo que se haya de pagar por cada una de ellas: 7.°, la cabida, número de toneladas ó cantidad de peso ó medida, que se obliguen respectivamente á cargar ó recibir: 8.°, el flete y los términos en que se haya de pagar; y 9.°, el tanto que por capa se haya de dar al capitan.

Las pólizas de fletamento, si intervino en ellas un corredor y certifica la autenticidad de las firmas de los contratantes, espresando que se pusieron á su presencia, ó si son reconocidas por estos, no habiendo intervenido aquel funcionario, hacen plena prueba en juicio. Si entre las pólizas hubiese discordancia, se estará por la que se concuerde con la del registro del corredor; y si no intervino corredor, ni fueron reconocidas las firmas por los contratantes, se juzgarán las dudas que ocurran en la ejecucion del contrato, segun los méritos de las pruebas que cada litigante aduzca en apoyo de su pretension. Cuando el contrato de fletamento no se ha estendido en la forma debida, y sin embargo se ha recibido el cargamento, se entiende celebrado aquel, segun lo que resulte del conocimiento; siendo entonces este el único título por donde se fijarán los derechos y obligaciones del capitan, del naviero y del fletador, en órden á la carga. Sentados estos precedentes, diremos que el cargamento está especialmente obligado al pago de los fletes, hasta cumplido un mes despues de haberlo recibido el consignatario, de manera que, durante este tiempo, puede exigir el fletante que se venda judicialmente la parte de él, necesaria para cubrirlos, aunque el consignatario se constituya en quiebra. Pasado aquel término, cesa esta preferencia, si bien los fletes se consideran como un crédito ordinario; y tambien cesa, y las mercaderías quedan libres de esta responsabilidad, si trascurridos ocho dias despues de su recibo, han pasado á manos de un tercer poseedor.

Si cargado un buque en el puerto impide su salida un accidente de fuerza insuperable, tiene derecho el cargador de descargar las mercaderías, y de volverlas á cargar, haciéndolo á su costa y pagando estadias, si retardase la carga despues de haber desaparecido la causa que entorpecia el viaje. El fletante, si la nave quedase inservible, tiene obligacion de fletar otra á su costa, que reciba la carga y la portee á su destino; pero cesa esta obligacion, si no se encuentra otra nave que fletar en los puertos, que estan á 30 leguas de distancia, en cuyo caso se deposita la carga en el puerto de la arribada por cuenta de los propietarios, se regula el flete de la nave inservible, á proporcion de la distancia, y no puede exigirse indemnizacion alguna. Pero si los cargadores justifican que el buque estaba ya inservible al recibir la carga, no podrán exigírseles los fletes y tendrán derecho á reclamar una indemnizacion. Si en el caso referido no proporciona el capitan embarcacion, por indolencia ó malicia, pueden buscarla y fletarla los cargadores á espensas del primer fletante, prévias dos interpelaciones judiciales al capitan, el cual no puede rehusar la ratificacion del contrato hecho por los cargadores, que se llevará á efecto de su cuenta y bajo su responsabilidad.

Si por bloqueo ú otra causa, que interrum-

pa las relaciones del comercio, no pudiera el capitan arribar al puerto de su destino, no habiéndole dado sobre ello instrucciones el cargador, está obligado á dirigirse y arribar al habilitado mas inmediato, y entregar el cargamento á la persona que en él tuviere comision de recibirlo; y si no hubiere persona alguna comisionada para este objeto, debe esperar y obrar segun las instrucciones del cargador ó del consignatario, soportar como avería comun los gastos que se ocasionen, y percibir por entero el flete de ida. Si el cargador ó el consignatario no hubieren nombrado un comisionado en el término suficiente, á juicio del tribunal de comercio, ó magistrado judicial de la plaza adonde se hizo la arribada, para que el cargador ó consignatario nombrasen en ella persona, que recibiese el cargamento, se decreta el depósito por el mismo tribunal, y se vende la parte de cargamento necesaria para pagar el flete.

El capitan de un buque, que hubiere sido fletado para recibir su carga en otro puerto, debe presentarse al consignatario designado en la contrata, y si este no le diere la carga, ha de avisar al fletador y esperar sus instrucciones, corriendo entretanto las estadias convenidas, y si no se hubiesen pactado, las que sean de uso en el puerto. Si el capitan no recibiese contestacion en el término regular, practicará las oportunas diligencias para contratar flete; y si fueren inútiles despues de haber corrido las estadias y sobre-estadias, formalizará su protesta, regresará al puerto donde contrató su fletamento, y tendrá derecho de exigir que el fletador le pague el flete por entero, descontando el que hayan devengado las mercaderías, cargadas por cuenta de un tercero.

Aquí tenemos una especie de consignacion mercantil, cuya acepcion no corresponde á la idea general de este acto del comercio, pues entendiéndose comunmente por él la remision hecha por un comerciante á otro de efectos ó mercaderías, en este caso significa la remision de un buque, cuya carga debe formar el consignatario. Se debe el flete íntegro de las mercaderías, cuando estas han llegado sin retraso, y el cargador no puede pedir disminucion, aun cuando hubieran sido deterioradas por caso fortuito, vicio propio de la cosa ó por mala calidad y condicion de los envases. Y no se libertará de pagarlo, ofreciendo abandonar los efectos del cargamento, estén ó no averiados; peró sí podrá abandonar por el flete los líquidos, cuyas vasijas hubiesen perdido la mitad de su contenido, porque realmente en este caso el trasporte de los líquidos no se ha verificado. No puede exigirse el pago del flete, ni retenerse á bordo el cargamento, bajo pretesto de recelar la falta de pago; sino desde el momento en que se han descargado las mercaderías y puesto á disposicion del consignatario. No obstante, habiendo algun justo motivo para desconfiar, puede el capitan acudir al tribunal de comercio y autorizar éste la intervencion de los efectos, que se descarguen, hasta que se hayan pagado los fletes.

Los cargadores tienen obligacion tambien de satisfacer los gastos que se ocasionen en descargar y volver á cargar las mercaderías en cualquiera puerto de arribada, cuando esto se haya verificado por disposicion suya, ó con autorizacion del tribunal para evitar daño y avería en la conservacion de los efectos (artículos 737 al 745, 766, 769, 770, 775, 777 al 781, 789, 790, 793 y 794 de id.).

De la doctrina espuesta aparecen los respectivos derechos y obligaciones de las personas, que intervienen en el comercio marítimo, y que con el trasporte de mercaderías dan existencia real y positiva al acto de la consignacion. Por lo demás, el consignatario que recibe aquellas, queda, como en el comercio terrestre, obligado al remitente en virtud del contrato de que proceda la remision de los efectos consignados.

Concluiremos este artículo insertando testualmente las disposiciones del Código de Comercio, que se rozan con la consignacion, en el título en que trata de las naves, y en el que se habla de la prescripcion en las obligaciones peculiares del comercio marítimo.

«Art. 596. Cuando las naves sean ejecutadas y vendidas judicialmente para pago de acreedores, tendrán privilegio de prelacion

las obligaciones siguientes, por el órden con que se designan:

1.° Los créditos de la Real Hacienda, si hubiere alguno contra la nave.

2.° Las costas judiciales del procedimiento de ejecucion y venta de la nave.

3.° Los derechos de pilotaje, toneladas, ancoraje y demás de puerto.

4.° Los salarios de los depositarios y guardianes de la embarcacion, y cualquiera otro gasto causado en su conservacion desde su entrada en el puerto hasta su venta.

5.° El alquiler del almacen, donde se hayan custodiado los aparejos y pertrechos de la nave.

6.° Los empeños y sueldos que se deban al capitan y tripulacion de la nave en su último viaje.

7.° Las deudas inescusables que en el último viaje haya contraido el capitan en utilidad de la nave, en cuya clase se comprende el reembolso de los efectos de su cargamento, que hubiese vendido con el mismo objeto.

8.° Lo que se deba por los materiales y mano de obra de la construccion de la nave, cuando no hubiere hecho viaje alguno; y si hubiese navegado, la parte del precio, que aun no esté satisfecha á su último vendedor, y las deudas que se hubiesen contraido para repararla, aparejarla y aprovisionarla para el último viaje.

9.° Las cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto, antes de la última salida de la nave.

10.° El premio de los seguros, hechos para el último viaje sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la nave.

11.° La indemnizacion que se deba á los cargadores por valor de los géneros cargados en la nave, que no se hubiesen entregado á los consignatarios, la indemnizacion que les corresponda por las averías de que sea responsable la nave.

«Art. 597. En caso de no ser suficiente el producto de la venta de la nave para pagar á todos los acreedores de un mismo grado, se dividirá entre estos, á prorata del importe de sus respectivos créditos, la cantidad que corresponda á la masa de ellos, despues de haber quedado cubiertos por entero los de las clases preferentes, segun el órden detallado.»

El art. 598 establece la forma en que se han de justificar los créditos, de que hace mencion el anterior, para gozar de la preferencia que en su respectivo grado se les marca, y dice en su párrafo final: «y los créditos de los cargadores por defecto de entrega del cargamento ó averías ocurridas en él, por sentencia judicial ó arbitral.»

«Art. 599. Los acreedores por cualquiera de los títulos mencionados en el artículo 596, conservarán su derecho espedito contra la nave, aun despues de vendida esta, durante todo el tiempo que permanezca en el puerto, donde se hizo la venta, y sesenta dias despues que se hizo á la vela, despachada á nombre y por cuenta del nuevo propietario.

»Art. 600. Si la venta se hiciere en pública subasta y con intervencion de la autoridad judicial, bajo las formalidades prescritas en el art. 608, se extingue toda responsabilidad de la nave en favor de los acreedores, desde el momento en que se otorgue la escritura de venta.

»Art. 601. Si se vendiese una nave estando en viaje, conservarán sus derechos íntegros contra ella los espresados acreedores, hasta que la nave regrese al puerto donde esté matriculada y seis meses despues.

»Art. 602. Mientras dura la responsabilidad de la nave, por las obligaciones detalladas en el art. 596, puede ser embargada á instancia de los acreedores, que presenten sus títulos en debida forma, en cualquier puerto donde se halle; y se procederá á su venta judicialmente, con audiencia y citacion del capitan, en caso de hallarse ausente el naviero.

«Art. 995. La (accion) del cobro de fletes y de la contribucion de averías comunes prescribe cumplidos seis meses despues de entregados los efectos que los adeudaron.

»Art. 996. La accion sobre entrega del cargamento ó por daños causados en él, un año despues del arribo de la nave.

»Art. 998. Se estingue la accion contra el capitan conductor del cargamento y contra

los aseguradores por el daño que aquel hubiere recibido, si en las veinticuatro horas siguientes á su entrega no se hiciere la debida protesta en forma auténtica, notificándose al capitan en los tres dias siguientes en persona ó por cédula.

»Art. 999. Tambien se estingue toda accion contra el fletador, por pago de averías ó de gastos de arribada, que pesen sobre el cargamento, siempre que el capitan percibiere los fletes de los efectos, que hubiese entregado, sin haber formalizado su protesta dentro del término que prefija el artículo precedente.

»Art. 1000. Cesarán los efectos de unas y otras protestas, teniéndose por no hechas, si no se intentare la competente demanda judicial contra las personas, en cuyo perjuicio se hicieren; antes de cumplir los dos meses siguientes á sus fechas.»

Nuevamente advertimos que en cuanto á procedimientos judiciales se tenga presente, en sus casos, la unificacion de fueros.

CONSIGNACION (EN LO RENTÍSTICO). Antiguamente en lo rentístico se decia consignacion el hecho de entregar á alguno la administracion de una ó varias rentas, bien como garantía de algun contrato celebrado con el Gobierno; bien para hacerse pago de anticipos, hechos al Estado. Con motivo de este sistema, hubo rentas que permanecieron largos años fuera de la administracion general, haciendo la fortuna de muchos consignatarios en esta forma.

En el dia, desde que semejante práctica ha sido abolida, y principalmente desde que, siendo una sola la gestion de todas las rentas, derechos é impuestos pertenecientes al Estado, ingresan en sus arcas los diferentes fondos, á fin de hacer con ellos frente, en justa proporcion, á todos y cada uno de los servicios públicos, no puede darse el caso de la consignacion á que se acudia antiguamente. Mientras no existia la centralizacion de fondos; mientras la cuenta al presupuesto no se llevaba con tanta regularidad, y cada tesorería particular era árbitra de verificar pagos, sin mas que acreditar la legitimidad del crédito, y sin responsabilidad alguna, toda vez que apareciese justificado el pago, es fácil de comprender la especie de caos que reinaria en la administracion de Hacienda, la falta absoluta de cuenta y razon, la monstruosa desigualdad con que estarian satisfechas las obligaciones, no solo segun su clase, sino con relacion á las diversas localidades. Un órden de cosas semejante, ó mejor dicho, semejante carencia de órden, no era posible subsistiese por mucho tiempo, á pesar de que documentos oficiales de época no lejana (Real órden de 30 de Diciembre de 1840), y hechos recientes denunciados sin contradiccion por la tribuna y la prensa, acreditan la continuacion hasta hace poco, y su reproduccion en los momentos actuales. Fué preciso entonces regularizar, ya que no igualar completamente, los diferentes servicios; y es preciso ahora, que muchos de estos, sino enteramente, se hallan desatendidos para fijarse tan solo en los mas apremiantes y de mayor urgencia, por mas que una marcha tal en los negocios no pueda ser duradera.

Merced á la nueva y sábia legislacion introducida en nuestro sistema de contabilidad, los procedimientos para el reintegro de la Hacienda pública en los casos de alcances, malversacion de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea su naturaleza, son siempre administrativos, y se siguen por la vía de apremio mientras se dirijan solamente contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y contra los fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones contraidas en las fianzas, ya por su intervencion oficial en las diligencias y aprobacion de estas, ó ya por razon de actos administrativos, que hubieren ejercido como funcionarios públicos. Así es que en la cobranza de créditos definitivamente liquidados á favor de la Hacienda, los procedimientos que se siguen no pueden pasar á hacerse contenciosos, mientras no se realice préviamente el pago ó consignacion de lo liquidado en las cajas del Tesoro público; ni el empleado, á quien se persigue administrativamente por alcances descubiertos, puede alzarse ante el Tribunal de cuentas contra la resolucion dictada en su perjuicio, sin que antes haya verificado el pago ó *consignacion* de la canti-

dad demandada (arts. 8.° y 14 de la ley de 20 de Febrero de 1850). Y hé aquí una de las acepciones que tiene la palabra consignacion, segun la espresada ley orgánica.

Pero la acepcion mas general de consignacion, y la mas constantemente admitida en el lenguaje rentístico, es la de señalamiento de fondos, cuando se trata de gastos hechos por la Hacienda, ó de cantidades á recaudar, cuando se trata de los ingresos, que corresponden á la misma. Todos los servicios tienen en los presupuestos, anualmente votados por las Córtes, señaladas ciertas sumas por capítulos ó artículos, segun los diferentes pormenores, á que hay que atender: en todos los presupuestos se fijan igualmente las cantidades que deben hacerse efectivas con aquel objeto por cada contribucion, renta ó ramo. Cuando se trata de abonar las cantidades así determinadas para un servicio cualquiera, se dice hay que satisfacer la consignacion de guerra, por ejemplo, hay que duplicar este mes la consignacion de marina, y es que efectivamente tienen consignadas las cantidades que periódicamente deben percibir. Por el contrario, en todos los meses se hace por el ministerio de Hacienda la distribucion á provincias de las cantidades que hay que recaudar por las diferentes rentas é impuestos, y al efecto se remite á los jefes respectivos un estado detallado de lo que segun cálculo prudencial corresponda hacerse efectivo por cada concepto, y se dice: la provincia *A* ha cubierto este mes con esceso su consignacion, si efectivamente ha superado los cálculos formados; ó tal provincia no ha cubierto su consignacion, si la cobranza no responde á la que se habia previsto.

Segun varias disposiciones de Hacienda, todos los servicios públicos de alguna importancia deben sujetarse á subasta, y varios destinos, que llevan consigo manejo de fondos, no pueden desempeñarse sin garantía. Al depósito, pues, que debe hacerse para poder tomar parte en las mencionadas subastas, y á la fianza que debe prestarse para ejercer ciertos cargos, se la llama tambien frecuentemente consignacion, por las cantidades que con los referidos objetos hay necesidad de consignar, sistema y efecto, que desenvolveremos ámpliamente en los artículos correspondientes.

CONSISTORIO. Version de *consistorium*, y esta voz del verbo *sisto*, estar, y la preposicion *cum*, convertida en *con* en ambas lenguas: estar reunidas, congregadas, en reunion simultánea las personas de que se trata.

Siempre, sin embargo, se ha aplicado á reuniones categóricas, notables, de autoridad y prestigio, en lo civil y eclesiástico. De ahí entre los romanos se llamaba *consistorium* el Consejo de los Emperadores. *Consistorium nostrum*, dice Constantino, aludiendo á lo que nosotros llamaríamos su Consejo (ley 3.ª, título 48, lib. 1.° del Código). Y hay otras varias leyes, en que se emplea la misma denominacion. Así tambien se denominaban los tribunales: *Consistorium*, dice el antiguo glosario, *vel prætorium, vel tribunal est locus, in quo more jus redditur*.

Entre nosotros, en algunas provincias, se llama consistorio el ayuntamiento, y casas consistoriales las de sus sesiones, ó reunion habitual.

En lo eclesiástico, espresa la reunion de cardenales, presidida por el Papa; y solo con esta circunstancia. Y no todas las reuniones de cardenales, en que el Papa se halla presente; sino dos de ellas por antonomasia. Dícense *consistorio público*, y es aquel en que el Papa, revestido de pontifical, y rodeado de sus cardenales, sentado en su sólio, recibe con solemnidad diplomática á los príncipes y embajadores; y *consistorio secreto*, que es aquel en que el Papa, reunido sin publicidad con sus cardenales, trata de las catedrales y prelados, nombra obispos, *preconiza*, ó confirma los presentados por las potencias católicas que tienen por patronato el derecho de presentar; y en los últimos siglos nombra tambien abades y prelados para las comunidades religiosas. Esto, segun la historia, ó como precedente histórico: por lo demás, nada se opone á que el Santo Padre trate en consistorio de otros asuntos, graves ó de importancia, como es en efecto y diariamente lo leemos: este no se denomina consistorio mero; sino, *quia simul, præsente Papa, consis-*

tunt cardinales, ó de otro modo, *quia cum Papa consistunt*.

Se llama consistorial todo lo que se resuelve en consistorio, ó tiene relacion con éste. Así se llama *abogado consistorial*, al que puede hablar en consistorio. Por esa razon se llaman beneficios consistoriales los obispados y abadías que se proveen en consistorio, y se llama consistorial, pero no consistorio, una reunion de cardenales y otros prelados, con secretario, en la cual se preparan las bulas que han de autorizarse en el consistorio.

CONSÓCIOS. Los compañeros de una sociedad, como contrato. Los consócios gozan entre sí del beneficio de competencia. Para sus reclamaciones sociales tienen entre sí la accion *pro socio*, como todo se esplana en su artículo.

CONSOLIDACION EN EL USUFRUCTO. La reunion del usufructo y de la propiedad de una cosa en una misma persona. Se funda en el principio de que *nemini res sua servit*.

En el usufructo *convencional* ó *voluntario*, la consolidacion en la persona del usufructuario tiene lugar, cuando adquiere la propiedad de la cosa usufructuada, por cualquiera de los títulos traslativos de dominio; y en el propietario de la misma, cuando, siendo condicional el usufructo, se cumple la condicion *resolutoria*, ó deja de cumplirse la *suspensiva* (bien que en este caso ningun derecho de usufructo propiamente dicho existe) por muerte natural ó civil del usufructuario; por la prescripcion ó sea el no uso, durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes; por la enajenacion del derecho de usufructuar, porque, siendo personal é intransmisible, se pierde por el hecho de enajenarlo, pues solo son enajenables los frutos, mas no el derecho de percibirlos; por espirar el término del usufructo, si se estableció hasta cierto dia ó por tiempo determinado; por renuncia ó remision que el usufructuario haga de su derecho, y antiguamente por la mutacion de estado del usufructuario que, siendo libre, se hacia esclavo (ley 24, tít. 31, Partida 3.ª).

En el usufructo *legal*, la consolidacion en la persona del usufructuario se verifica por fallecimiento del hijo, cuyos bienes reservables y peculio adventicio usufructúa su padre, á quien pasan como heredero; y en la persona del propietario, cuando el padre hace profesion religiosa en alguna órden monástica; cuando se le quita legal y judicialmente la administracion de los bienes del hijo; cuando se le impone alguna pena perpétua, como reo de delito grave (ley 3.ª, tít. 8.º, Part. 5.ª) y cuando el hijo contrae matrimonio. Si este se emancipa en otra forma, puede su padre retener la mitad del usufructo (ley 15, tít. 18, Partida 4.ª).

CONSOLIDADOS, CONSOLIDACION. Han de verse, como precedente, los artículos **EFECTOS PÚBLICOS, DEUDA DEL ESTADO** y **VENTAS REALES**, con lo que ya queda espuesto acerca del particular en los de **CAJA DE AMORTIZACION** y de **CONSOLIDACION**.

Y no es que se separe gran cosa ciertamente la significacion que en general se dá á aquellas palabras, de la que tienen en el lenguaje administrativo y rentístico. Dar firmeza y estabilidad legal á una obligacion oral ó escrita, es lo que generalmente se entiende por consolidar, así como por consolidacion la aplicacion de las formas y garantías que la producen. Y segun nuestras leyes de Hacienda, á la emision de ciertos documentos representativos de lo que daba el Estado, á la inscripcion de ellos en el registro ó gran libro de la Deuda pública, á la garantía que les prestan aquellas solemnidades, juntamente con la designacion de fondos especiales ó los generales, con que cuenta la Nacion para atender á su pago, es á lo que se dá el nombre de consolidacion, llamándose consolidados esos títulos de crédito, esos efectos públicos, esos valores del Estado, que con todos estos nombres se les conoce, y que se hallan revestidos de los requisitos necesarios.

Dos hechos se desprenden de esta brevísima esposicion. La necesidad que tienen los Estados, cualquiera que sea su organizacion y cualesquiera que sean sus recursos ordinarios, de acudir en circunstancias estremas,

cuando la integridad de la pátria peligre ó cuando hay que mantener el honor de ella en una guerra, á hacer uso de su propio crédito levantando las cantidades para hacer frente á estos gastos estraordinarios. La necesidad, no menos imprescindible, de vigorizar ese mismo crédito, en virtud de medidas previsoras y eficaces, para que no esterilizando en su orígen semejante elemento de accion y de prestigio, pueda acudirse á él cuando sea indispensable.

No es por desgracia nuestro país el que con menos frecuencia ha tenido que apelar, ya desde antiguos tiempos, á esos recursos estremos, que con el nombre de *asientos*, de *arbitrios*, de *préstamos*, de *imposiciones* de toda clase, ha debido acudir, para hacer frente á las exigencias de los tiempos, y á las hondas cuanto prolongadas perturbaciones que ha sufrido. Sin que sea nuestro ánimo entrar por hoy en la triste y desgarradora historia de sucesos semejantes, que tendrán su natural desarrollo en otra parte; basta á nuestro propósito fijarnos por hoy en un solo hecho, el que mas analogía tiene con el asunto concreto de que vamos tratando, y cuya fecha además coincide con el principio del siglo actual, desde cuya época comienzan á fijarse entre nosotros los buenos principios de crédito público.

Este hecho es el de la creacion de los vales reales, que han sido los primeros documentos de la Deuda pública, que han circulado en España, como papel-moneda. Constituida esta deuda en siete emisiones diferentes, verificadas desde 1780 á 1799, tuvo en el mercado, durante todo este tiempo, un valor igual y á veces mayor del que efectivamente representaba, hasta que la falta de pago de sus intereses la trajo al mayor abatimiento. Por eso sin duda el señor Rey D. Cárlos IV, en su Real pragmática de 30 de Agosto de 1800, se lastimaba de que, no obstante la especial predileccion con que atendia á dichos vales reales, hubiesen *llegado á perder en su reduccion á metálico las tres cuartas partes del verdadero valor que representaban* (es decir, que se cotizaban á 25 1/2, hablando en el lenguaje moderno, lo cual entonces se creia ya una calamidad), y dictaba nuevas disposiciones, dirigidas todas á levantar el crédito de estos documentos. El caso debió ser, sin embargo, la mejora que mas adelante llegaron á adquirir, cuando D. Fernando VII, por Real decreto de 3 de Abril de 1818, despues de espresar sus desvelos para *hacer productivos y no estériles, como son en el dia*, los capitales representados por dichos vales reales, despues de espresar la ninguna esperanza que para ello le quedaba por medio del *puntual pago en metálico de sus intereses*, puesto que *la Nacion, empobrecida con tantas adversidades, no puede facilitar los recursos necesarios convenientes al efecto*; despues, en fin, de atribuir á la gran masa de aquellos documentos en circulacion el vicio principal de su descrédito, se decide, como única medida *beneficiosa para el Estado, para el comercio, para la industria y para los contribuyentes*, á refundir todo aquel papel en dos solas clases, á saber: vales consolidados y no consolidados. Nótese bien que esta es la primera vez que se establece semejante distincion entre nuestros efectos públicos.

Pero se empezó tímidamente, haciendo potestativa la conversion á los poseedores de aquellos títulos, y aun cuando se ofrecian ciertas ventajas á los vales, que alcanzaban la consolidacion, como era, entre otras, el interés de 4 por 100, que debia abonarse por cuatrimestres, y la admision por todo su valor en pago de la quinta parte de los derechos de aduanas, contribuciones reales y cualquiera otra clase de pago, que personalmente correspondieran al interesado, se continuó admitiendo los no consolidados sin descuento alguno en la compra de fincas afectas al crédito público, y los que ni siquiera se presentaron al cange, que se hacia por terceras partes, es decir, dando por un vale comun de 150 pesos, uno consolidado de 50, y otro no consolidado de 100: á esos vales comunes se continuó acreditando los mismos intereses que anteriormente, y abonándose segun permitia el estado de los fondos y las obligaciones de justicia, á que se tenia que acudir.

Así continuó esta deuda, hasta que por

Reales decretos de 4 de Febrero, 8 de Marzo de 1824 y reglamento de la Caja de amortizacion de 23 del mismo mes, se hizo obligatoria la consolidacion de la tercera parte de los vales comunes, que antes era voluntaria, quedando definitivamente las otras dos terceras partes en la clase de deuda no consolidada sin interés.

De qué modo mas adelante quedó estinguida esta clase de créditos, habiéndose mandado, por Real decreto de 30 de Marzo de 1831, convertir en inscripciones de la deuda consolidada al 4 por 100, transferibles á voluntad de sus tenedores, ó sea al portador, todos los vales consolidados, y cómo, de conversion en conversion, la misma deuda consolidada del 4 y 5 por 100 ha venido despues reduciéndose, hasta no conocerse en el dia con el nombre de consolidado mas que el llamado 3 por 100, asunto es que pertenece mas de lleno al estudio sobre el orígen, vicisitudes y estado actual de toda nuestra Deuda pública, y en el cual entran, como parte de esta última, los préstamos en consolidacion, las imposiciones en consolidacion, de los que, á no ser aquel su verdadero sitio, nos habríamos ocupado en este lugar.

Pero tenemos que volver, aunque no sea mas que por un momento, á hacernos cargo del Real decreto de 8 de Marzo de 1824, verdadero punto de partida en la manera de ser actual de nuestra Deuda pública, y orígen, puede decirse, de la consolidacion de aquella. Grandes eran los esfuerzos, que venian haciéndose, desde los últimos años del siglo anterior, para asegurar la suerte de los acreedores del Estado, ya tratando de organizar el crédito de la Nacion sobre sólidas bases, ya restableciendo la confianza pública y creando con este objeto cuantiosos arbitrios, que no pudiesen tener otra aplicacion que el pago de los créditos, á que se habian destinado. Todos, sin embargo, habian llegado á ser estériles, unas veces por la administracion complicada y dispendiosa, dada á aquellos mismos arbitrios, que llegaban casi siempre á ser insuficientes al objeto; y otras á causa de las graves vicisitudes y trastornos, porque habia tenido que pasar la Monarquía, durante aquel azaroso período. Restablecida en lo posible la calma, el Sr. D. Fernando VII, por medio del decreto antes citado, se propuso *levantar el nuevo edificio del crédito sobre los escombros del antiguo*, y además de algunas otras medidas análogas al fin que se proponia, determinó la creacion del gran libro de la Deuda pública, en el cual debian aparecer perfectamente clasificados y garantidos todos los créditos que tuviese contra sí la Nacion. Por la importancia de este documento y los altos principios de moralidad y de justicia que en él resplandecen, no podemos menos de señalar á continuacion algunos de sus artículos:

«Art. 1.° Se formará desde luego el gran libro de la Deuda consolidada, en el cual se inscribirán, en los términos que se espresará, los capitales reconocidos.....

»Art. 6.° No se podrá inscribir deuda alguna en el gran libro sin Real decreto, espedido á virtud de consulta de la comision de inscripciones, compuesta de un consejero de Estado, presidente, del director de la Caja de amortizacion, de dos consejeros de Hacienda y del fiscal mas antiguo del mismo Consejo, todo con los requisitos prevenidos en el artículo anterior.

»Art. 7.° Tampoco se podrá inscribir deuda alguna sin que esté asegurada la renta para la amortizacion y pago de intereses.

»Art. 8.° Todo crédito, inscrito en el gran libro, queda reconocido como deuda consolidada é inviolable.....

»Art. 13. Además del gran libro, en el cual debe inscribirse solamente la deuda consolidada, habrá en la caja de amortizacion otros dos libros, de los cuales, uno será destinado al asiento de la deuda corriente con interés no consolidado, y otro á la deuda sin interés.....

»Art. 28. Por hipoteca general de la consignacion de la caja señalo, además de la especial, que forman los arbitrios enumerados en mi Real decreto de 4 de Febrero (en número de treinta y cinco), las rentas todas de la Corona.»

Son tambien notables los arts. 7.° y 8.° del reglamento de 23 de Mayo para llevar á efecto el anterior decreto, que dicen así: «Los capi-

tales inscritos en el gran libro serán inviolables; sus propietarios los disfrutarán con entera libertad, sin que puedan ser secuestrados por ningun respecto, y solo se oirá la reclamacion que pueda hacer al efecto cualquier tribunal ó jurisdiccion, en el caso de delito de lesa majestad.

»Art. 8.° Todo estranjero, interesado en las inscripciones del gran libro, gozará del privilegio que concede el artículo anterior, y cobrará sus réditos con puntualidad, aun cuando se halle en guerra con España la potencia á que perteneciere.»

Gran conquista para el crédito de un país son las máximas de sana moral y de honor, consignadas en los artículos anteriores, y ojalá que antes de ellos se hubieran tenido siempre presentes por los gobiernos, pagando religiosamente á sus acreedores, ó transigiendo de buena fé con ellos sobre los plazos y medios de realizarlo; y ojalá que despues no se hubieran desentendido de ellas algunas veces los gobernantes, fiados en el augusto poder de la autoridad soberana, y causando por este medio daños inmensos al erario, á la vez que la ruina de numerosas familias.

Réstanos, para concluir, decir solo algunas palabras, acerca de lo que se entiende por renta consolidada, y las circunstancias que la hacen distinguir de las demás. En primer lugar *renta consolidada* y *deuda consolidada* son una misma cosa, tomando aquella denominacion por el interés que la última produce. De aquí se desprende la necesidad de un interés fijo, determinado desde luego, sin el cual la deuda, que carece de él, no puede pertenecer nunca á la clase de consolidada. Como el Estado, que es siempre aquí el deudor, no está obligado al reembolso del capital en ningun caso, ni en plazo alguno, sino únicamente al pago anual ó semestral de los intereses, segun se haya convenido, resulta tambien que esta deuda reune un carácter de permanencia y perpetuidad, que hace que se le denomine indistintamente renta perpétua ó renta consolidada. A diferencia de otras deudas, que tienen por limitacion de tiempo la vida del acreedor, como las pensiones por ejemplo, por lo cual se llaman vitalicias; de las que no producen interés, y el Estado se halla obligado al reembolso del capital sin plazo fijo, pero destinando á su amortizacion, por medio de subasta, una cantidad anual, señalada de antemano por los poderes públicos, como en la deuda personal y la del material del Tesoro; ó de las deudas en que se hallan combinados el interés anual y la amortizacion á la par, dentro de un número de años dado, como sucede con los billetes hipotecarios de la 1.ª y 2.ª série, y recientemente con los bonos del tesoro; la deuda consolidada no tiene delante de sí plazo alguno de reembolso de capital, que es lo que podria abrumar aun á los mismos gobiernos, cuya Hacienda se halla más sólidamente constituida. Como la única obligacion que impone dicha deuda, es la del pago corriente de los intereses, y no es pequeña, por cierto, considerada la estension que se la ha dado en los últimos tiempos, tal vez por esta causa, que es la que dá márgen á los abusos del crédito, los gobiernos se preocupan poco del capital que representan; y solo cuando las circunstancias son favorables, tratan de reducir la cuantía de los intereses por medio de una operacion conocida (véase **CONVERSION**), y en virtud de la cual se aumenta frecuentemente el capital reconocido como débito, y sin embargo, se considera beneficiosa al Estado si se ha conseguido reducir los intereses.

Estas son las únicas consideraciones, que hemos creido deber hacer por hoy, para dar una idea clara, aunque concisa, de lo que se entiende por consolidacion, consolidados, no obstante el íntimo enlace que tienen con otras materias que serán tratadas por separado.

CONSORTES. De *sors* la suerte, y *cum*, convertido en *con*, espresando los que participan de la misma suerte, estado, destino. Así se llaman consortes el marido y la mujer, unidos en matrimonio. A veces se llaman así los contrarios en un pleito. La cualidad de consortes, en su acepcion genérica, argüiria, unas veces, parcialidad para juzgar al consorte, ó declarar en causa que le interese: otras culpabilidad comun, como en el caso de delincuencia; lo que ha de juzgarse en concreto en cada caso.

CONSPIRACION. Concertarse dos ó mas, para fines determinados. Viene del verbo latino *spiro*, en una de sus acepciones, aspirar á algo, proponerse algo; y la proposicion *cum* convertida en *con*; aspirar á algo juntamente con otros. Dedúcese de lo dicho que, etimológicamente y en términos absolutos, la conspiracion será inofensiva, vituperable, plausible tal vez, segun el fin para que se conspira.

Una cosa, pues, es cierta, incontrovertible en el órden moral y en el órden de la justicia, y es que, si al fin que conspiran es inmoral, vituperable, criminal; de la misma naturaleza será el hecho de ponerse de acuerdo con tal designio, de entenderse y ponerse de acuerdo, la conspiracion. Es esto de un rigor lógico incuestionable, ó no hay lógica, y ni aun filología en lo moral, y en lo jurídico. No es sostenible lo contrario, ni aun como *derecho individual ilegislable*, cualquiera que sea la estension que á estos se dé, pues nunca es lícito, ni por tanto *derecho*, el derecho de reunion, ni el de asociacion para el mal, para delinquir. De aquí que, en lo criminal, siempre la conspiracion se estima contraria á las leyes.

Y adelantamos esta idea filológica y filosófica de la conspiracion, porque no parece sino que se trata de vulnerar el derecho, de conculcar la justicia, de castigar la inocencia, cuando se trata de reputar justiciable la conspiracion para delinquir. Sin contravenir á la moral, á la justicia en su caso, á las garantías del órden social, el conspirar contra la propiedad, ó la vida del ciudadano, ó contra el órden público, no puede ser indiferente, no puede ser derecho; no hay derecho, contra derecho.

Otra cosa será considerar, y castigar en su caso, la conspiracion, como el mismo delito á que se aspira por su medio; de lo cual nadie estaría mas léjos que los autores de la ENCICLOPEDIA. Pero *est modus in rebus*: el seguro y justo criterio para la pena es el de la culpabilidad, debidamente apreciada. Ahora veremos como la han apreciado nuestros legisladores modernos; pues para los antiguos nunca hubo duda de que un conjunto de conspiradores reunidos, sobre todo de secreto, estaban delinquiendo.

La conspiracion, así como la proposicion para delinquir, eran punibles segun el artículo 4.° del Código penal de 1850: la primera se castigaba como tentativa; la segunda con una pena inferior en dos grados á la anterior, «salvo aquellos casos en que la conspiracion y la proposicion tengan señalada mayor pena por artículos especiales del Código» (artículo 62 id.). Esta salvedad alude á los delitos de traicion, regicidio, rebelion y sedicion (arts. 143, 161, 162, 173 y 180). Eximia de toda pena el desistimiento de la conspiracion ó proposicion para cometer un delito, dando parte y revelando á la autoridad pública el plan y las circunstancias antes de haber comenzado el procedimiento (art. 4.° cit.).

La base en que la ley se funda, al establecer contra la conspiracion las sanciones que quedan espuestas, se reduce al principio de que, en la serie de actos que median entre el pensamiento del delito y su ejecucion, la sociedad está facultada para reprimir todos aquellos que se traducen en hechos. Cuando el propósito, la voluntad, se convierte en un hecho, directamente encaminado á la perpetracion de un delito, y que la facilita ó la asegura, y este primer paso en la ejecucion del hecho criminal es racionalmente susceptible de investigacion, ya entonces la ley puede y debe apoderarse de él, definirlo y castigarlo.

No obstante lo obvio y sencillo de esta teoría, el art. 4.° del Código, en la reforma de 1850, ha sido objeto de acerbas censuras. Su precepto ha sido combatido por su misma generalidad, ya bajo el punto de vista del derecho constituyente, ya tomando por norte el constituido de nuestro país, ya el de las demás naciones civilizadas del mundo.

El ilustre Pacheco, siguiendo en este punto la opinion de Ortolan y otros criminalistas, aunque reconoce como *acciones malas* (testual) la conspiracion y la proposicion para delinquir, desaprueba la reforma, fundándose principalmente en las dificultades que, á su juicio, habian de presentarse en llevar la investigacion á esas esferas. En igual sentido se espresó el Colegio de abogados de

Madrid, en su informe de 29 de Noviembre de 1852.

Pero ¿hay lógica en los impugnadores de la reforma, aceptando la redaccion primitiva del artículo que nos ocupa, y rechazando la moderna? En nuestro sentir, no. La novedad consiste únicamente en haber elevado á la categoría de regla general lo que antes constituia un triste privilegio de determinados delitos: y una de dos; ó la conspiracion y la proposicion son actos, que pueden caer bajo el dominio de la ley penal, ó no. Si no lo son, mal se esplica el aplauso de un precepto que los declara punibles respecto de algunos delitos. Si lo son, ¿qué inconveniente hay en generalizar esta doctrina? No se hable de conveniencia pública, ni de altos intereses sociales, palabras que puede tomar en boca el gobernante para justificar actos escepcionales de severa represion; pero que no suenan bien en los labios del jurisconsulto ó del legislador. Siempre sobre esa conveniencia flotará el eterno interés de la justicia, cuya primera y más legítima exigencia es que no se persigan como delitos aquellos actos, de que solo á Dios debe el hombre dar cuenta.

Los adversarios de la reforma reconocen que la conspiracion pertenece al linaje de actos, que la ley puede sin escrúpulo castigar; solo que, en su concepto, este castigo debiera limitarse á los delitos políticos, y eso (dicen) porque, tratándose de crímenes difíciles de reprimir y de gran trascendencia al órden y seguridad de las naciones, puede admitirse que se castiguen, *como por escepcion*, actos preparatorios que no han llegado aun á ser principio de ejecucion de delitos, viniendo así á ser delitos *sui generis*. Nosotros ni aun por escepcion podemos admitir que se castigue como delito, lo que no lo es, y mucho menos, cuando el código señala á alguno de esos actos, cuya imputabilidad se tiene por dudosa, penas tan graves, como la cadena temporal.

Así pues, si aplaudimos la innovacion introducida en 1850 en el artículo mencionado, es porque estamos íntimamente convencidos, de que con ella no se invadió el terreno inviolable de la conciencia humana: porque creemos que el que se concierta con otros, ó les propone la perpetracion de un delito, delinque más ó ménos gravemente, segun la importancia del delito propuesto: y en una palabra, porque, si bien reconocemos en el legislador la potestad de mostrarse más severo con unos, que con otros crímenes, apreciando su frecuencia, los principios que pueden lastimar, la alarma que producen, ó los intereses sociales ó políticos que comprometen, no podemos atribuirle el derecho de crear y suprimir delitos sin más guía que la conveniencia, y sacrificando á ella los eternos é inmutables principios de la justicia.

La conspiracion supone siempre la necesidad de un esfuerzo colectivo para llevar á cabo el delito, necesidad que así puede tener su orígen en la naturaleza peculiar del hecho, como en las circunstancias particulares de cada caso. El criminal, pues, que se asocia con otros para realizar su designio, principia á ejecutarlo; el que, resuelto á delinquir y, necesitando para ello del concurso ageno, propone séria y deliberadamente á otro tomar parte en su culpable empresa, comienza á delinquir. Dada la necesidad absoluta ó relativa de la asociacion para perpetrar el crímen, es indudable que el solo hecho de asociarse con tal objeto es un principio de ejecucion del hecho criminal. «Aunque las leyes no castigan la intencion, ha dicho el insigne Beccaria, autoridad no sospechosa en la materia, no por eso deja de ser cierto que un delito, á que se dá principio con alguna accion *que prueba la voluntad* de cometerlo, merece castigo, aunque menos grave que el que se impondria, si se hubiese cometido en efecto; lo importante que es *precaver* un atentado, autoriza este castigo.»

Que hay dificultades para llevar las investigaciones á esos actos. No seremos nosotros ciertamente quien lo niegue; pero no menores las ofrecen, aun consumados, varios delitos de los que el código ha definido y castigado. ¿Tan fácil es, por ventura, obtener una conviccion suficiente de la existencia de la prevaricacion, tal como la caracterizan los artículos 269 y 270 del Código? ¿Acaso no

ofrecen el mismo inconveniente las sanciones señaladas á las asociaciones ilícitas, y en general á todos aquellos delitos que por su especial índole han menester el misterio para consumarse? La dificultad de la investigacion y de la prueba no debe estimarse razon suficiente para borrar del catálogo de los delitos aquellos actos que, en buenos principios, sean esencialmente criminales.

Por lo demás, que la conspiracion se considere como un primer paso en la ejecucion del delito, ó como un delito aparte, que es lo que dice Ortolan, nos es indiferente, siempre que se dé cabida al indiscutible teorema de que la conspiracion es punible. No creemos deber hacer cuestion de palabras de lo que es verdaderamente una cuestion de filosofía y de derecho.

Supone tambien el distinguido comentador del Código penal, cuyas opiniones refutamos, que la reforma, al generalizar el principio de que la conspiracion para delinquir es punible, ha prescindido de los antecedentes pátrios en la materia, citando como tal el Código de 1822, en cuyo art. 6.° se consignaba que la proposicion y la *conjuracion* no serian castigadas, sino en los casos en que la ley lo determinara espresamente. En efecto, si al dirigir una mirada retrospectiva á nuestra antigua legislacion penal, hacemos alto en el Código de 1822, los antecedentes son contrarios al precepto del art. 62 del de 1850. Pero si buscamos los precedentes en los primitivos cuerpos legales españoles, allí encontraremos el gérmen de esta combatida disposicion. Allí veremos que el Fuero Juzgo (ley 3.ª, tít. 1.°, de su libro 8.°), establece penas contra *los que se ayuntan por fazer muerte ó ferida*. Allí tambien el Fuero Real, cuya ley 11, tít. 4.°, libro 4.°, es tan notable, que no podemos resistir al deseo de copiarla. «Cuando alguno, dice, ayuntare algunas compañas, que no sean tenudos de facer su mandado por razon de su señorío, *para matar á otro, ó facer otro daño cualquier*, aquel que los ayuntó peche treinta maravedís; é cada uno de los otros que fueron con él, peche veinte maravedís al Rey por la osadía: é si mataren ó firiesen, todos hayan la pena que manda la ley; é si otro daño ficieren, peche el que los ayuntó la meitad de la pena que mandan las leyes, é la otra meitad pechen los otros que fueron con él.» Veríamos asimismo casi todo el tít. 12, del libro 12 de la Novísima Recopilacion, consagrado á los *ayuntamientos* y *ligas*, formados con fines criminales. Y en vista de tales antecedentes fuerza seria reconocer, que el art. 4.° del Código, lejos de separarse de ellos, los acata y respeta, combinándose en su apoyo la doble sancion de la filosofía y de la historia.

En cuanto á la autoridad de las legislaciones estranjeras, diremos exactamente lo que Pacheco, repecto del testo legal que nos ocupa: «bajamos nuestra frente, pero no podemos aprobar.» Abrigamos la íntima conviccion de haber demostrado la oportunidad y la justicia de la teoría, que sirve de base á las doctrinas del Código español, y en este concepto nos es imposible reconocer como acertadas las que se han consignado en los estranjeros, cualquiera que sea el respeto que nos merezcan sus autores, y por mas que sus opiniones, por ser suyas y por hallarse muy difundidas, sean de gran valor moral y científico.

No cabe, por lo demás, comparacion entre legislaciones, cuyas bases son diametralmente opuestas. Las estranjeras, en ódio á los delitos políticos, toleran que, por escepcion, se lleve en ellos la pesquisa y el castigo, hasta á aquellos actos que, en general, tienen por simplemente preparatorios del crímen: la española de 1850, no solo no limita la represion de tales actos á los delitos políticos; sino que ni aun es para ellos mas severa que para los demás; antes bien por lo comun, al tratar de estos delitos, restringe la severidad de las penas consignadas en el artículo 62 para la conspiracion y la proposicion *in genere*. Tan cierto es esto, que en los delitos de traicion, penados con cadena perpétua y muerte, y entre los cuales figuran algunos, cuya mera tentativa se reprime con el mismo rigor que su consumacion, el conspirador tiene señalada la pena de presidio mayor: en el regicidio, delito cuya sola tentativa se espía con la última pena, la conspiracion aparece castigada

con la cadena temporal: en la rebelion, cuya penalidad oscila entre la cadena temporal y la muerte, se señala á la conspiracion la prision mayor; y por último en los delitos de sedicion, penados con reclusion y cadena, temporales ó perpétuas segun los casos, el que para ellos conspira sufre por todo castigo la prision correccional. Y es que en esos delitos, que se consideran de escepcional importancia, bien que produzcan profunda alarma y general desasosiego, la conspiracion y la proposicion están, mas que en otro alguno, distantes de la consumacion: no se produce un movimiento político, ni se atenta á la vida del gefe del Estado con la misma facilidad y prontitud, con que se concierta un robo, una estafa ó el homicidio de un particular; así es, que la misma gravedad del hecho es una rémora para su ejecucion, resultando de aquí la menor urgencia de atacarlo severamente desde su orígen.

Al interés social basta que el castigo de las conspiraciones políticas sea suficiente para contener, y pudiendo prevenir, no tiene objeto el escederse en el castigo; esto, dejando aparte la no despreciable circunstancia de que los delitos políticos, en general, aunque sean mas temibles por su trascendencia al órden público y á la prosperidad colectiva de las naciones, considerados en sí mismos, como delitos de opinion casi siempre, son quizá los menos repugnantes que en sus páginas registran los códigos de todos los países.

Lugar es este de advertir que el adjetivo *mayor*, de que hace uso el art. 62, refiriéndose á las penas señaladas especialmente á la conspiracion y proposicion para determinados delitos, es sin duda un error material de copia, porque, como hemos visto, el Código en ningun caso establece penas especiales, superiores á las que, en términos genéricos, asigna en aquel artículo para los dos referidos grados de culpabilidad: á nuestro juicio, donde dice *mayor*, debió ponerse *menor*, ó usar de los adjetivos *especial* ó *distinta*. Sin embargo, este, al parecer, error puede encontrar una esplicacion, que no nos parece violenta. El libro primero del Código, libro fundamental y de doctrina abstracta, tiene un carácter de solidez é inmutabilidad, de que carecen los libros segundo y tercero: puede decirse de estos, que son la disciplina, y aquel el dogma; los unos, modificándose y cambiando al compás de los adelantos, necesidades y costumbres de los pueblos, y el otro permaneciendo firme, como las verdades científicas que en su mayor parte lo constituyen. En este concepto, quizá la palabra *mayor*, empleada en el susodicho artículo, aluda á las agravaciones de pena que, en la represion de la conspiracion y proposicion para cometer ciertos delitos, pudieran introducir posibles evoluciones ulteriores en el mecanismo del libro segundo.

Lo que desde principios del siglo ha tomado constantemente un carácter escepcional, ha sido el procedimiento para la averiguacion y represion de las conspiraciones políticas. El decreto de las Córtes de 17 de Abril de 1821, estableciendo penas para los *conspiradores* contra la Constitucion, tuvo su natural complemento en otro de igual fecha, relativo al conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiracion, cuya base consistia en someter á la jurisdiccion militar la represion de tales delitos, ampliándose á ellos las disposiciones de la ley 8.ª, tít 17, lib. 12 de la Novísima Recopilacion, referentes á los salteadores de caminos y sus cómplices, aprehendidos por la tropa en las poblaciones.

De índole mas gubernativa, que judiciaria, el Real decreto ó ley de 22 de Diciembre de 1836, dictó varias reglas, encaminadas á determinar las solemnidades y requisitos con que habia de procederse para la detencion, reconocimiento de papeles ú otros efectos de los indiciados ó sospechosos de conspiracion política y sus cómplices, fautores, auxiliadores y encubridores; el término dentro del cual deberian estos ser entregados á los tribunales, y otras facultades discrecionales del Gobierno, para el caso en que los méritos de lo actuado gubernativamente no fuesen bastantes para la formacion de causa.

Tal era el estado de la legislacion en esta materia hasta la publicacion de la ley de órden público de 20 de Marzo de 1867, en que se dictaron disposiciones de carácter per-

manente para la prevencion y represion de toda clase de delitos contra el órden público, estableciéndose las debidas y naturales distinciones entre las épocas normales, las de agitacion ó alarma, y las de guerra, ó sea hostilidad manifiesta de los perturbadores contra los poderes legítimos.

Esta ley, empero, apenas ha sido aplicada. El cambio político de 29 de Setiembre de 1868 la derogó virtualmente, y las Córtes Constituyentes la han sustituido despues con la de 23 de Abril de 1870, en que, conservándose casi idénticas las reglas del procedimiento, se ha introducido la importante modificacion de no llevar la especialidad de sus prescripciones al estado normal. Hoy, pues, solo cuando, suspensas las garantías constitucionales, queda declarado, *ipso facto*, el estado de *prevencion* y *alarma*, ó cuando se declara el de *guerra*, hay ley especial sobre el modo de proceder en los delitos contra el órden público. Como quiera, pues, que los de conspiracion no son sino una especie de aquel género, dejaremos la esposicion y exámen de las diversas leyes que quedan citadas, para los artículos **DELITOS POLÍTICOS: ÓRDEN PÚBLICO.**

Lo que sí debemos hacer notar, contrayéndonos al objeto del presente, es que la ciencia jurídica, en su constante y progresivo perfeccionamiento, ha ido, á la vez que suavizando el rigor de las penas, simplificando la tramitacion de las causas, para que el castigo ganase en prontitud y ejemplaridad, lo que perdia en dureza: tendencia altamente loable y que, no solo satisface al sentimiento; sino tambien al interés bien entendido de la sociedad, mas propensa á prevenir ó remediar con rapidez los estragos de las revoluciones, que á ocurrir á ellos con medidas de rigor inútiles, cuando se adoptan despues del triunfo, ó cuando el peligro ha dejado de ser temible.

Tambien se ha debatido largamente sobre el último párrafo del artículo 4.° del Código penal, en que se exime de toda pena al que desiste de la conspiracion ó proposicion, dando parte á la autoridad del plan y sus circunstancias, antes de haber comenzado el procedimiento. Sobre este particular nada tenemos que añadir á lo espuesto en el artículo **ARREPENTIMIENTO**, en el cual nos hemos hecho cargo con la estension debida de las objeciones opuestas á las doctrinas consagradas en aquel testo respecto de la desistencia.

Escrito el precedente comentario á las disposiciones antes vigentes, en la materia objeto de este artículo, ha aparecido el novísimo Código penal, que rige provisionalmente, en virtud de la ley de 18 de Junio de 1870, y en el cual se restablece literalmente el precepto del Código de 1848. Hoy, pues, la conspiracion, teóricamente hablando, solo es punible cuando la ley la pena especialmente.

Se ha restringido tambien el alcance de la definicion de este grado de delincuencia. Los códigos anteriores veian conspiracion, allí donde existia el concierto de dos ó mas personas para cometer un delito. El actual necesita además que estas personas *resuelvan* ejecutar el hecho para el cual se asocian (artículo 4.°).

Esta adicion ha de ofrecer, y ofrece desde luego, algunas dificultades en su inteligencia. Si por *resolucion* se entiende el *propósito* de delinquir, la exigencia del Código es sin disputa redundante, puesto que los que se conciertan sériamente con un objeto, claro es que tienen voluntad deliberada de llegar á ese objeto. La resolucion, pues, de cometer el delito precede necesariamente á la conspiracion, es decir al concierto, á la acumulacion y eleccion de medios, y á la designacion del instante oportuno para lanzarse á vías de hecho.

¿Será á esta última parte del complot, á lo que quiere aludir la ley? Es difícil, porque eso equivaldria á establecer que los conspiradores no pueden ser perseguidos hasta la víspera de convertirse en ejecutores materiales del delito. Y sin embargo, de no admitir esa version, seria preciso suponer, en vez de una solucion, una dificultad. Debe notarse además, lo dispuesto acerca de la *proposicion* para delinquir, la cual existe cuando el que *ha resuelto* cometer el delito, propone su ejecucion á otra ú otras personas. En aquel supuesto resulta, que para castigar la simple

propuesta de un delito basta que á ella haya precedido la resolucion, ó sea el ánimo y voluntad de perpetrarlo, y que la conspiracion, acto mas grave y alarmante que la propuesta, no podrá perseguirse, sino cuando los conspiradores tengan madurado su plan, y definitiva y minuciosamente preparada la ejecucion del delito.

De todos modos, los impugnadores de la reforma de 1850 están de enhorabuena. Aquel lunar científico de nuestra legislacion penal, ha desaparecido, en la apariencia al menos, puesto que hoy solo se castigan, bajo la denominacion de conspiraciones, las que tienen por objeto la perpetracion de ciertos delitos de traicion, el homicidio del Rey, inmediato sucesor á la Corona ó Regente del Reino, la rebelion y la sedicion.

Pero como el buen sentido y la necesidad imperiosa de ocurrir á la salud del pueblo, y de no dejar completamente abandonados altos intereses sociales, se abren camino al través de esas teorías, cimentadas de ordinario sobre la base de un organismo social y de una naturaleza humana de todo punto ideales y quiméricos, los legisladores de 1870 han pagado su tributo á aquella necesidad, declarando *ilícita* toda asociacion *que tenga por objeto cometer alguno de los delitos* que el Código reprime, y castigando á todos los que forman parte de ellas, desde sus fundadores, hasta el último de sus individuos, por el solo hecho (nótese bien), por el solo hecho de asociarse con fines reprobados por la ley (arts. 198, 199 y 200).

Acaso estemos ofuscados; pero dirémos sinceramente, que en estos preceptos de la ley penal no vemos otra cosa que el castigo de la conspiracion, tímidamente establecido, para toda especie de delitos: castigo llevado á las veces hasta la inverosimilitud, como sucede cuando se aplica á los fundadores, directores y presidentes, y hasta á los meros individuos de dichas asociaciones, *cuando estas no hubiesen llegado á establecerse* (arts. 199 y 200, núm. 1.°); que es tanto como castigar al que ni siquiera ha conspirado todavía. ¿Cómo no hemos de preferir lo esplícito de nuestras doctrinas, que son las del Código de 1850?

Otra novedad ofrece, por último, en el particular la legislacion novísima: la supresion del párrafo final, art. 4.° del Código de 1850, que declaraba exento de toda pena al que desistiese de la conspiracion, dando parte y revelando á la autoridad el plan y sus circunstancias, antes de comenzarse el procedimiento. Sobre este punto remitimos de nuevo al lector al artículo **ARREPENTIMIENTO**.

En lo antiguo, los compromisos y acuerdos adoptados en la conspiracion, se vigorizaban con amenazas para el que faltase, con execraciones y juramentos: llamábase entonces *conjuracion*. Véase este artículo.

CONSTANTE. Voz del lenguaje comun, que alguna vez se hace técnica en el derecho. Así se dice *constante el matrimonio*, que es existiendo este, durante este: *miedo que cae en varon constante*, lo mismo que en varon relativamente fuerte, que reune el valor y presencia de ánimo, que en casos iguales reune la mayoría de los hombres.

CONSTANTINOPLA (CONCILIO DE). Entre los muchos, que se celebraron en la ciudad de Constantino, hay cuatro que llevan el concepto de generales, y de ellos vamos á hablar.

En el artículo **CONCILIO** dejamos sentado que eran 21, y hoy con el incoado, pero pendiente *Concilio Vaticano*, son 22 los concilios generales, ó ecuménicos, recibidos como tales por la Iglesia católica, correspondiendo los 8 primeros, en cuanto á su celebracion, á la iglesia de Oriente, y los restantes á la de Occidente. Entre aquellos el 2.°, 5.°, 6.° y 8.° son los de Constantinopla.

Concilio 1.° Ya queda espresado que es el segundo de los generales. Fué celebrado en 381, concurriendo á él 151 obispos católicos y 36 de la secta de Macedonio, cuya heregía, que consistia en negar la divinidad del Espíritu Santo, fué la principal causa del Concilio. Este fué convocado por el Emperador Teodosio; segun unos, como Sócrates, Sozomeno y varios mas, sin anuencia ó prévia intervencion del Papa Dámaso, que lo era á la sazon; segun otros, con ella: entre estos, Baronio, que hablando de los documentos an-

tiguos, depositados en la biblioteca del Vaticano, cita uno, en que se leen las siguientes palabras: *Sententiam de damnatione Macedonii et Eunomii, Damasus confirmare præcepit, etiam in sancta secunda synodo, quæ præcepit, et auctoritate ejus, apud Constantinopolim celebrata est.*

Dujat cita la seccion 18 del tercer Concilio general, en la cual los padres, despues de haber hablado de varias cuestiones contra los herejes, añaden, que, así como Constantino y Silvestre habian opuesto el Concilio de Nicea contra Arrio, *Teodosio* y *Dámaso habian opuesto asimismo el de Constantinopla contra Macedonio.*

Teodoreto además, en su *Historia eclesiástica* (lib. 3.°, cap. 3.°), asegura de una carta sinodal, escrita por los padres de este Concilio al Papa Dámaso, la que robustece la idea de relaciones y armonía entre el Concilio y el Papa.

No se conciliaria, sin grave dificultad, que en tales tiempos, cuando de tal modo hervian las herejías, que hasta tal punto inquietaban á la Iglesia y escitaban el celo de los papas y de los emperadores católicos, dejase de intervenir armonía y la debida inteligencia entre tal Papa y tal Emperador, y respecto de un Concilio, como el de Constantinopla.

Ni porque faltase, lo que repetimos no puede suponerse, habria de ponerse en duda la ecumenicidad del Concilio, de tantos modos acreditada, bastando para ello, en todo caso, como respecto de otros, el reconocimiento posterior de la Iglesia universal y su cabeza, de lo que seria insigne testimonio la de todos sabida manifestacion del Papa San Gregorio, de tener en tanto los *cuatro primeros* concilios generales (de los cuales es el 2.° el 1.° de Constantinopla), en cuanto á las declaraciones de fé, *in quantum ad rei fidei, sive quod ad damnandas hæreses attinet*, como los cuatro evangelios.

La Iglesia universal, en fin, lo tiene recibido entre los demás generales de Oriente, en el cuerpo del Derecho: *Sancti octo universalia concilia, id est, primum Nicenum: secundum Constantinopolitanum: tertium Ephesinum: cuartum Chalcedonense: item quintum Constantinopolitanum: sextum, item Nicenum: septimum, octavum quoque, Constantinopolitanum, etc.* (Can. 8.°, distint. 16.)

Se tiene por cierto que presidieron sucesivamente el Concilio San Melecio, San Gregorio Nacianceno, Teófilo de Alejandría y Nectario.

Y asimismo, que los cánones, hechos por él, fueron solo tres, subdividido luego el tercero por los griegos, hasta que resultaron los siete que en algunas ediciones se presentan.

Es notable por demás, y honroso para este concilio, que, teniendo en cuenta nuevas herejías, posteriores al Concilio de Nicea, modificó, adicionándolo con sus condenaciones implícitas, esto es, asentando la ortodoxia correspondiente, el solemnísimo y venerando *Símbolo, ó Credo*, del Niceno, dejándolo tal, como lo tiene recibido y hoy se canta en la Iglesia universal, salvo la frase *filioque*, añadida despues y admitida por la Iglesia latina, lo cual fué y es causa principal del cisma entre esta y la griega, adherida en este punto al símbolo de Nicea.

Concilio 2.° constantinopolitano (5.° *general*). Condenados en el de Calcedonia, 4.° general, los errores de Nestorio, no podian correr sin contradiccion las doctrinas, que mas ó menos se inclinaban á ellos. Y bien: Teodoro, obispo de Mopsuesta, que pasaba por maestro de aquel heresiarca, habia llamado la atencion en su tiempo, con un escrito, que pareció hallarse en aquel caso, si bien venia á exámen, cuando su autor habia muerto ya. Hízose notable tambien por sus impiedades, la conocida carta de Ibas, obispo de Edeso, á Maris. Teodoreto, en fin, publicó otro escrito contra los doce anatemas de San Cirilo, contrarios á Nestorio. Estos tres escritos son los que llevan en la historia eclesiástica el nombre de *los tres capítulos*, y como diremos, ellos fueron el objeto del Concilio constantinopolitano 2.°

Repetimos, que, condenados los errores de Nestorio, podian suponerse asimismo los *tres capítulos* en el calcedonense. Pero queda dicho que Teodoro habia muerto ya. Ibas y Teodoreto, dieron sus esplicaciones en el Concilio, y fueron habidos, como ortodoxos.

Mas aun: Ibas, que habia sido despojado de su diócesis, por el conciliábulo de Efeso, denominado *latrocinium ephesinum*, fué restablecido á ella por el calcedonense; quedando por todo vacilante la opinion, sobre si habia habido condenacion dogmática, en cuanto á sus escritos, en el calcedonense. La Emperatriz además, no era favorable al sínodo de Calcedonia, y se supone que por ello indujo al Emperador Justiniano á condenar legislativamente *los tres capítulos*, como lo verificó por edicto solemne, en 546.

Recrudeciéronse las cuestiones con este motivo, á punto de que se creyó indispensable la definicion y anatema de un concilio general. El Emperador mismo, excitó al Papa Vigilio, para ir á Constantinopla, como lo verificó, y de acuerdo, se convocó el Concilio, objeto del presente artículo, verificándose su apertura el 5 de Mayo de 553. El Papa quiso que fueran llamados los obispos latinos, á lo que no se accedió: multiplicáronsele además los disgustos y aun persecuciones, negándose por todo ello á presidir el Concilio, declarando que daria su opinion separadamente. El Concilio le envió una diputacion de 18 obispos, entre ellos tres patriarcas y algunos metropolitanos, á rogarle su asistencia, á la que se negó de todo punto. Algun tiempo despues, publicó el conocido decreto, llamado *constitutum*, relativo á *los tres capítulos*, esplicando cierta tolerancia, respecto de ellos. El Concilio, sin embargo, los condenó con anatema, por el voto de 165 obispos. El mismo Papa Vigilio aprobó despues la decision del Concilio, por una nueva constitucion. Los Papas Pelagio y Gregorio I, lo admitieron, así bien, en el número de los concilios generales (lib. 2.°, epíst. 56: libro 1.°, epíst. 24: cap. 9.° y 10, dist. 16).

En un principio, las iglesias de Africa, Francia y España, admitian con dificultad, como general este concilio, reputándolo, ó mas bien, reclamando que, por las observaciones que hicimos al principio, contradigese al de Calcedonia, que aplicó indulgencia personal respecto de Ibas y Teodoreto. Pero era la verdad que dicho concilio no habia declarado ortodoxos los tres capítulos; habló Roma además, segun hemos indicado, y dichas iglesias sintieron como Roma, reputándolo general.

Concilio 3.° (6.° *general*). Tuvo por objeto y condenó el error de los *monotelitas*, que no admitian en Jesucristo sino una voluntad: esto es, la voluntad divina, negando por tanto la voluntad humana. Fué celebrado en 680, convocado por el Emperador Constantino Pogonato, y por el Papa Agaton, que envió sus legados. Concurrieron, segun unos, 270 obispos; segun otros, 289. No trató sino de la fé, y nada de la disciplina. El Papa Leon II, sucesor de Agaton, lo confirmó, por carta al Emperador en 683, condenando en ella *nominatim*, á varios monotelitas. Confirmólo tambien el Papa Nicolás, por carta al Emperador Miguel; y espresado así el asentimiento de la Santa Sede y de la Iglesia universal, quedó reputado tal el concilio.

4.° *Concilio Constantinopolitano* (8.° *general*). Fué convocado en 869, por el Emperador Basilio, enviando sus legados el Papa Adriano II. Se celebró en 869 y 870, en la iglesia de Santa Sofía, concurriendo 45 obispos, para reponer en su Silla de Constantinopla al Santo Patriarca Ignacio, destituido indignamente por Fócio y los suyos, lo cual dió orígen al gran cisma de Oriente. Los griegos cismáticos no consideran como general este concilio; pero es así reputado por la Iglesia universal, como lo espresa la historia y se consigna en el ya citado *can.* 8.°, *dist.* 16.

Como ampliacion histórica, haremos mencion del Concilio de Constantinopla, llamado *Concilio in Trullo*, por haberse celebrado en el Palacio Imperial, en el salon de la gran cúpula, llamada en griego *trullo*. Ya hemos visto que en los concilios 5.° y 6.° se hicieron solo cánones de fé, y ninguno de disciplina. Hubo de sentirse la necesidad de esta, y se convocó con tal motivo este concilio, que los griegos denominan *quinisesto* (*Quini-sexta-synodus*), reputándolo como complemento del 5.° y 6.° generales, 2.° y 3.° de Constantinopla. Lo convocó el Emperador Justiniano el Jóven. Bahamon supone que lo firmaron legados del Papa; pero Baronio le censura agriamente por ello, sosteniendo que hasta

ahora no ha aparecido la suscricion. Lo firmaron 211 obispos y el Emperador. Hiciéronse en él 102 cánones de disciplina.

En la profesion de fé, reconocia la de los Apóstoles y la de los Concilios generales; y que los cánones, que se proponian seguir, eran los 85, atribuidos á los Apóstoles, y los de Nicea, Ancira, Neocesárea, Gangres, Antioquía, Laodicea, y los de los Concilios generales de Constantinopla, Efeso y Calcedonia; y aprobó por último las epís'olas canónicas de San Dionisio y San Pedro Alejandrino, San Gregorio el Taumaturgo, San Alhacio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, San Cirilo, y las de Antíloquio y Teófilo. Los griegos lo reputan Concilio general. La Iglesia latina no lo ha recibido, á causa principalmente del cánon sobre matrimonio de los clérigos. Reputándolo concilio general, los griegos mandaron legados á Roma, para su admision, y fueron tan mal recibidos, que apenas pudieron evadirse y salvar la vida.

Además de los autores citados, véanse los artículos **CISMA, CONSTANZA Y PISA** (*concilio de*), y la *Coleccion de Cánones de la Iglesia española*, por Gonzalez, traduccion de Tejada y Ramiro.

CONSTANZA (**CONCILIO DE**). Este Concilio, y los de Basilea y Pisa, abarcan el período lamentable del gran cisma de Occidente.

Tuvo por objeto el mismo cisma y las herejías, que condenó de Wiclef, Juan Hus y Jerónimo de Praga.

En nuestro artículo **CISMA**, esplicamos lo suficiente el cisma, trayéndolo con su orígen, á lo menos ocasional, de la traslacion de la córte pontificia á Aviñon. Sabido es, que los seis pontífices, que se sucedieron, durante los 70 años que allí residió la córte pontificia, fueron todos franceses, lo que no podia menos de afectar á la Italia, ya que no al resto de la cristiandad. El 6.° de aquellos papas, Gregorio XI, pasó á Roma, por motivos que en otra parte esponemos, y allí murió; y Roma pudo creer llegada su ocasion. En efecto: reunidos en cónclave los 17 cardenales, que habian de nombrar Pontífice, gentes amotinadas allanaron el cónclave, amenazando de muerte, si no se nombraba Papa que fuese romano, ó por lo menos italiano. Y, no obstante que trece de los cardenales eran franceses, y solo cuatro italianos, resultó electo Bartolomé Priguano, arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI, siendo coronado con asistencia de todos los cardenales. A poco estos evacuaron á Roma, reuniéndose en Anaqui; y tomando por base la violencia antes sufrida, declararon nula la eleccion, eligiendo por nuevo Papa los cardenales franceses á Roberto, cardenal de Ginebra, que se denominó Clemente VII. Trasladóse á Aviñon, estallando así el cisma, con un Papa en Aviñon y otro en Roma, pues claro es que Urbano VI no se reputó depuesto, pudiendo dudar la cristiandad cuál de los dos papas era el legítimo. Italia, Alemania é Inglaterra siguieron á Urbano VI; á Clemente VII, Escocia y luego España, decidiéndose primero Castilla y despues Aragon. A Urbano VI le sucedieron en Roma, Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII: á Clemente VII en Aviñon, en 1394, el cardenal de Aragon Pedro de Luna, que tomó el nombre de Benedicto XIII. A los pocos años, Francia, á consulta de la universidad de París, le negó la obediencia, haciendo lo mismo Castilla en 1400, agravándose cada dia los efectos del cisma.

En tal estado, los príncipes seculares, redoblaron, aunque en vano, sus esfuerzos con los dos papas rivales, para que, por bien de la Iglesia, convocasen de acuerdo un Concilio general, que devolviese la paz á la misma. Pero los cardenales de Benedicto XIII, con parte de los de Gregorio XII, se trasladaron á Pisa, y tuvo lugar el Concilio general de este nombre, el cual, citando á los dos papas, que no comparecieron, los declaró fautores del cisma y depuestos de su dignidad. Ordenó en su consecuencia, que los cardenales reunidos, de ambas obediencias, nombrasen nuevo papa, como lo fué, en 1409, Pedro Filando, Arzobispo de Milan, que tomó el nombre de Alejandro V, falleciendo al año siguiente, y siendo nombrado en su lugar Baltasar de Cossa, que adoptó el nombre de

Juan XXIII, con lo que la cristiandad, supuesta la persistencia de Gregorio y Benedicto, se hallaba con tres papas.

Urgia, con angustiosa y universal ansiedad, el remedio, que no podia ser otro que el de un nuevo concilio general, y tuvo lugar el de Constanza, convocado por Juan XXIII, por bula de 9 de Diciembre, trasladándose el mismo á Constanza, abriéndose luego sus sesiones, el 5 de Noviembre de 1414. Segun algunos, concurrieron cuatro patriarcas, 28 cardenales, 47 arzobispos, 160 obispos: de la clase de seglares, además del Emperador Segismundo, que desplegó para la reunion del Concilio y en su sostenimiento el celo mas decidido, multitud de príncipes, condes, barones y nobles: ¡tal era la ansiedad general! La primera sesion la presidió el Papa, pronunciando un discurso adecuado.

Sucedió esto, como queda indicado, el 5 de Noviembre de 1414. En Febrero siguiente se presentaron comisionados de Gregorio XII y Benedicto XIII; disputóseles el distintivo de cardenales, con que se presentaron, pero á pesar de esto, por el bien de la paz, fueron admitidos.

El aflictivo estado de cosas, debia aun implicarse más. En las primeras congregaciones empezó á agitarse la idea de escitar, y caso necesario, obligar á Juan XXIII, á renunciar: y como queda dicho que Gregorio XII y Benedicto XIII habian sido desposeidos en el Concilio de Pisa, la Iglesia quedaria así en plena libertad de elegir nuevo y único pontífice.

Para facilitar en las deliberaciones y en las graves cuestiones, que amenazaban, para el efecto de la prévia direccion y propuesta al concilio, este se dividió en las que se llamaron *naciones*, con los nombres de Italia, Francia, Alemania é Inglaterra.

En una de estas congregaciones se presentó un pliego de numerosos cargos graves, y propuesta de destitucion de Juan XXIII; y todo estimado, se le mandó una comision, para que voluntariamente renunciase al pontificado, á lo que contestó, que estaba pronto á verificarlo, con tal que hiciesen lo mismo los otros dos contendientes, Angel Carrario y Pedro de Luna, que, no obstante la declaracion del Concilio de Pisa, seguian denominándose Gregorio XII y Benedicto XIII.

Tres naciones propusieron al fin una fórmula de renuncia con juramento al pontificado, que habia de pronunciar y pronunció Juan XXIII. El concilio todo la recibió con regocijo; pero cuando en su vista se propuso proceder á la eleccion de nuevo Pontífice, Juan XXIII, disfrazado de postillon, se fugó, lo cual, presentando la idea de que no defería á la nueva eleccion, aspirando en su consecuencia á sostener su cualidad de Papa legítimo, consternó al concilio, que así veia alejarse la paz y la deseada solucion. Inclinado el concilio á disolverse, el Emperador declaró que no lo consentiria, y que aquel con toda seguridad podia deliberar sobre la paz de la Iglesia, no obstante la fuga del Papa.

Preciso es notar que el Concilio de Constanza es digno de grande estudio, ya históricamente, ya en el órden canónico y de disciplina. Desde luego se vé formalizarse en él la imponente cuestion, ya en cierto modo iniciada en el de Pisa, *de si el concilio es ó no superior al Papa*; cuestion que en su lugar esponemos. El celebrado Gerson, canciller de la Universidad de París, sostuvo la afirmativa en favor del concilio, y veremos que este la decidió procediendo en tal concepto.

Decidido el concilio á continuar, en una de sus sesiones adoptó por unanimidad, entre otras, la declaracion siguiente:

«En nombre de la Santísima Trinidad, Pa»dre, Hijo y Espíritu Santo, este sagrado Si»nodo de *Constanza*, formando un Concilio »general, legítimamente reunido en nombre »del Espíritu Santo, para gloria de Dios om»nipotente, estincion del presente cisma, »union y reforma de la Iglesia de Dios en su »cabeza y miembros; con el objeto de ejecu»tar el designio de esta union y reforma, mas »fácil, segura, perfecta y libremente, ordena, »define, establece, decreta y declara lo si»guiente: 1.° Que el referido Concilio de »*Constanza, congregado legítimamente en* »*nombre del Espíritu Santo*, y formando un »concilio general, que representa la Iglesia

»militante, ha recibido inmediatamente de »Jesucristo un poder, al que toda persona de »cualquier estado y dignidad que sea, *aun »papal*, está obligada á obedecer en lo per- »teneciente á la fé, á la estirpacion del pre- »sente cisma y á la reforma de la Iglesia, *en »su cabeza* y miembros.»

Al fin, resistiéndose Juan XXIII á la abdicacion, en la sesion 10, el 14 de Mayo, el concilio lo declaró depuesto, convencido por los setenta cargos de que habia sido acusado, y decaido, por tanto, de la dignidad y autoridad pontificia. Notificada esta resolucion al Papa, este se dió por enterado y se resignó con ejemplar sumision: en su consecuencia, en la sesion 12 del 29 del propio Mayo, fué solemnemente depuesto.

Restaba aun que resolver sobre los ya antipapas Gregorio y Benedicto. El primero habia enviado su renuncia, con tal que en la sesion, en que se diese cuenta, no presidiese Juan XXIII, á causa de que Gregorio no reconocia la legitimidad del concilio convocado por este; en virtud de lo que se decidió que el Emperador presidiese, y presidió la sesion, en que se dió cuenta y admitió la renuncia.

Esperábase con inquietud la de Pedro de Luna, dicho Benedicto XIII, pero en vano. En su consecuencia, en la sesion 37, del 26 de Julio de 1417, se le declaró perjuro, fautor del cisma que habia escandalizado á la Iglesia universal, indigno de todo cargo, y, como tal, se le degradaba, privándole de todo título y derecho al pontificado, prohibiendo á la universalidad de los cristianos, de cualquier órden que fuese, prestarle obediencia, pena de ser tratados como reos de cisma y herejía.

No por eso cedió Pedro de Luna, que sostuvo su empeño, hasta que murió en Peñiscola, á donde se habia retirado, en 1424. Al morir encargó á dos cardenales, que le habian seguido, que le eligiesen sucesor, pena de perpétua maldicion, como lo verificaron, declarando electo á Gil Muñoz, Canónigo de Barcelona, que, á instancia del Rey de Aragon, aceptó con el nombre de Clemente VIII, á quien pudo hacerse renunciar en 1429, aceptando una canongía.

Entre tanto el Concilio, depuesto Pedro de Luna, mandó proceder á dar cabeza á la Iglesia, siendo elegido en 1417 el cardenal Otton Coloma, denominándose Martino V, con lo que concluyó el gran cisma. Martino V gobernó ya toda la Iglesia, no bastando á impedirlo la obstinacion del cardenal Luna, á quien solo quedaron reconociendo el Rey de Escocia y el conde de Armeñal.

El Concilio concluyó con la sesion 49, celebrada el 22 de Abril de 1418, presidiéndola Martino V. En las sesiones 42 y 43 publicó él mismo una bula, confirmando el concilio y preceptuando obediencia al mismo en sus decisiones por la Iglesia universal. Es muy de observar, como cuestion de doctrina, que este concilio, en su 5.ª sesion, habia declarado la superioridad del Concilio sobre el Papa. Véase CISMA.

CONSTITUCION. Version de *constitutio*, con la misma significacion. Viene en castellano de *constituir*, y este verbo del latino *constituo*, derivado y compuesto, á su vez, del verbo *statuo*, establecer con autoridad, mandar, ordenar; y la preposicion *con*. Conviniendo el verbo compuesto con su original, espresa la misma idea cardinal, ó fundamental, de estatuir ó constituir, esto es, legislar, dictar determinaciones, que sean obligatorias para todos, si son generales, como la *ley*; ó solo al individuo, ó clase á que se dirigen, como el privilegio, los estatutos, las constituciones particulares. Por consecuencia de todo lo dicho, constitucion es lo constituido, ó estatuido, el acto y resultado de constituir; y como, de legislar, resulta la *ley*, asi de estatuir el estatuto, de constituir, la constitucion.

Se ve que viene siempre dominando, como idea capital y generadora, el principio de autoridad, que constituye la regla obligatoria; y como en la aplicacion de este alto principio, lo constituido es por ello lo que es, y no otra cosa; como en la universalidad de las cosas, ya en el órden físico, ya en el moral, aquel principio, ó circunstancia, por la cual, una cosa *es lo que es, y no otra*, se llama su *esencia*; de aquí le viene la aplicacion de la palabra constitucion. Limitándola nosotros al órden legal y convencional, tiene las princi-

pales aplicaciones que espresan los artículos subsiguientes.

CONSTITUCION (EN LO CIVIL). Viniendo aquí, como en tantos otros puntos de derecho, la terminología de los romanos, en sus leyes habremos de buscar la solucion. Y ahora bien: por las leyes romanas, constituir era legislar: constitucion, por tanto, era lo legislado ó constituido. Pero ¿por qué, habiendo ya entre los romanos una tecnología legislativa tan universal y propia, se llamaron constituciones, haciendo esta novedad en el lenguaje, las resoluciones legislativas de los emperadores, de cualquier clase que fuesen en el órden legislativo? El hecho es cierto: la solucion tiene que ser filológica: constituir era legislar, establecer el Príncipe reglas legislativas; pero no ya como las antiguas leyes, los senado-consultos, los plebíscitos, etc., cuando no habia Príncipe. Ahora seria por este, y no considerado en su aislamiento personal; sino coadyuvado, como lo indica la preposicion comunitiva *con*, que entraba en el verbo constituir: asistido el Príncipe de sus consejeros; de su *consistorio* (véase este artículo); y de ahí con propiedad y aun con necesidad filológica, constituir, constitucion, que era el derecho nuevo, que versa sobre el antiguo, innovándolo, ó abrogándolo; y lo mismo las sentencias de los jurisconsultos.

Hé aquí el testimonio de los mismos; el de Ulpiano, y convertido ya en ley: «Quod prin»cipi placuit, legis habet vigorem: utpote »cum lege regia, quæ de imperio ejus lata »est, populus ei, et in eum omne suum im»perium et potestatem conferat. Quodcum»que, igitur, Imperator, per epistolam et sus»criptionem statuit, vel cognoscens decrevit, »vel de plano interlocutus est, vel edicto præ»cepit, legem esse constat: *hæc sunt quas vulgo* »*constitutiones appellamus*» (ley 1.ª, tít. 4.º *De Constitutionibus Principum*, lib. 1.º, Digesto).

«*Constitutiones*, tempore posteriores, potiores sunt his, quæ ipsas præcesserunt» (ley 4.ª, id., id.).

Seria interminable el recorrer las numerosas leyes romanas que así lo demuestran, y vemos que aun las Novelas se denominan *novellæ constitutiones*.

Generalizando el principio, se estendió la denominacion aun á los actos y mandatos de autoridades particulares, de los tribunales, y aun en lo convencional, de los particulares, que con su voluntad establecian la ley, que los ligaba en aquel caso. Y se decia y se dice; pues, como era natural, ha venido dominando en lo legislativo y jurídico la misma terminología: constitucion de dote, constitucion de censo, y hasta se espresa el estado y actualidad social de la persona, como constituirse en quiebra; bajo la proteccion de otra persona; la autoridad pública en el lugar de algun suceso etc., etc. Véase el escelente *Vocabularium juris utriusque* de Vicat, artículos CONSTITUERE, CONSTITUTIO.

CONSTITUCION (EN EL ORDEN ECLESIASTICO). Nacida la Iglesia con la civilizacion romana, y habiendo recibido proteccion y desarrollo durante el imperio, era casi inevitable que en asuntos de disciplina esterna, tomase, con mas ó menos estension, no solo la terminología; sino aun las formas y prácticas de aquella legislacion. Y así fué en efecto. En un principio, atenta la Iglesia á sus altos fines, y á diferenciar, en cuanto ser pudiera, aun sus formas esteriores de las leyes y prácticas seculares, en vez de leyes, constituciones y aun cánones, denomina simplemente *reglas* á las prescripciones, ya obligatorias, ya de consejo, de los Apóstoles y Santos Padres: luego, señaladamente á las primeras, á las del órden legislativo, las llamó *constituciones*, alternando esta denominacion, como es sabido, con la de cánones, y otras de nadie desconocidas; esplicándose y haciéndose hasta técnico el lenguaje de los canonistas en este concepto, y siempre encerrando en su esencia el de *ley* la palabra constitucion, como á su vez la de cánon. «Constitutio est lex scripta. Constitutionibus autem, aliæ civiles, aliæ ecclesiasticæ.» (Laucetot, *Institutiones Juris Canonici*, lib. 1.º, tít. 2.º)

Este es tambien el sistema y lenguaje de los cánones. «Licet Romanus Pontifex (qui jure omnia in imo pectoris sui censetur habere), constitutionem condendo posteriorem.

priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare videtur. (Sesto Decretalium, libro 1.°, tít. 2.°, *De Constitutionibus*): y podrian citarse aun multiplicados comprobantes, como por ejemplo, el tít. 2.°, lib. 1.° de las Decretales, *De Constitutionibus*; y en el Decreto el cánon 3.° distin. 4.°

Se ve, pues, que en sentido genérico, la palabra *constituciones eclesiásticas* abraza todo el derecho canónico, y recíprocamente esta enunciacion todas las constituciones eclesiásticas, si bien las palabras constitucion y constituciones se usan, á veces, en sentido específico, y es cuando se indica el orígen de su autoridad: como constituciones pontificias, constitucion del Papa, que no es otra cosa que un decreto pontificio, y son bien singulares y recientes las dos constituciones de Pio IX, *De Ecclesia* y *De Fide*, promulgando las declaraciones del Concilio Vaticano, en ambos sentidos.

Segun los canonistas, las *constituciones eclesiásticas*, ó los cánones, colectivamente tomados, contienen *statuta conciliorum, decreta pontificum, et dicta patruum, seu sanctorum* (Lancelot, citado): y que las constituciones pontificias se dividen en *decretos pontificios, decretales* y *rescriptos*, cuyas palabras esplicamos en su lugar, ciñéndonos aquí principalmente á las *constituciones* apostólicas ó pontificias, como emanadas del Papa.

Es indudable y sabido que el primado de honor y jurisdiccion del Pontífice romano lleva inherente la potestad legislativa, que siempre han ejercido los sucesores de San Pedro, con mayor ó menor solemnidad, en la Iglesia católica, sobre toda clase de negocios de interés universal, general ó particular para ella. En su mayor parte, los decretos ó constituciones pontificias han sido resoluciones, acordadas á instancia ó consulta de los obispos; siendo casi innumerables las espedidas resolviendo dudas ó dificultades en materia de derecho, delegando poderes ó dirigiendo exhortaciones, dando instrucciones al cuerpo episcopal y á los sacerdotes sobre asuntos relativos á la administracion de las cosas eclesiásticas, ó dictando reglas de disciplina para algunos reinos, provincias ó diócesis en particular. Como es consiguiente, componen el menor número de las constituciones pontificias, las que contienen disposiciones generales para toda la Iglesia, acordadas muchas veces en los concilios ó en alguno provincial romano, y publicadas á nombre del Pontífice.

Aunque son de igual valor legal intrínseco las constituciones apostólicas ó pontificias, sin embargo, han tenido denominaciones distintas y sido publicadas con distinta solemnidad, segun los tiempos. En los primitivos, para dar á conocer al mundo católico sus determiniciones, solian los Papas valerse de *cartas* llamadas *á paribus* ó *sinódicas*, espidiéndolas, no solo para la celebracion de concilios; sino muchas veces tambien para esplicar puntos de fé ó dogmáticos; y asimismo acostumbraban servirse de la *correspondencia epistolar* que dirigian á los obispos, sujetándola comunmente á cierta fórmula ó minuta, igual para todos ellos (1). Bajo la denominacion general de cartas ó decretos *sinódicos* se comprendian multitud de otras distintas y especiales, como *responsa, constituta, sanctiones, monita, decretalia, decreta, interdicta, regulæ auctoritatis, statuta, sententiæ, decretales epistolas* y otras varias, cuyos distintos nombres significaban la clase de asuntos, que se trataban en ellas, el carácter de las personas á quienes iban dirigidas, ó la estension, mayor ó menor, del territorio eclesiástico, en que habian de tener cumplimiento sus disposiciones.

Todas estas clases de epístolas fueron despues conocidas con el nombre genérico de *Constituciones pontificias* ó *apostólicas*, aludiéndose con este calificativo al apostolado, cuyo jefe es el romano Pontífice, como sucesor de San Pedro. No obstante, se diferenciaban, en constituciones propiamente dichas, cuando versaban sobre puntos ó materias de interés general; y en rescriptos, cuando se espedian sobre asuntos de interés particular. Las constituciones apostólicas tienen la denominacion de *encíclicas*, cuando van dirigidas

(1) Phillips, *De jure canon.*, lib. II, cap. 2.°, párrafos 149 y 150.

á todos los obispos, ó á los de una nacion determinada, para reformar algun abuso en la disciplina ó condenar algun error en materia de fe; *responsa ó epistolas decretales*, cuando se espiden á peticion de ciertas personas de elevado carácter, ó á consulta de los obispos, y *decretos* cuando *motu proprio* los dá el Papa, con ó sin el consejo de los cardenales, y prévia consulta, ó sin consulta de ninguna corporacion ni persona.

CONSTITUCION CIVIL DEL CLERO. Conocido es de los hombres de derecho el célebre documento, que recibió en Francia y lleva ese nombre. Mejor que constituir el clero, lo desorganizó. Hemos adelantado ya este documento, y puede verse en el artículo **CLERO**.

CONSTITUCION POLITICA. La que en todo estado constituido determina la forma de gobierno, organizando el ejercicio de la soberanía.

Puede ser puramente tradicional y consuetudinaria, cual sucedia en tiempos antiguos: puede ser escrita, pero en diversas leyes particulares, aunque de índole fundamental, como la constitucion de la monarquía goda, entre nosotros; y despues la sucesiva de Castilla: tambien escrita en parte, en parte consuetudinaria, como la que menos podia suponerse, la constitucion inglesa: y puede ser, en fin, una ley única, ó de un único contesto, como lo son hoy las de casi todos los Estados políticos, despues que la codificacion ha dominado en la formacion de las leyes, prevaleciendo sobre el método histórico.

Espresa siempre el ejercicio de la soberanía nacional, ya radicada, teórica y prácticamente en la nacion, ya compartida con un Monarca.

Puede en este caso ser hecha por las Córtes, ya solas, ya con el Soberano, en cuyo caso aquellas se llaman constituyentes; ó dada por el Soberano, y aceptada ó simplemente jurada por el pueblo, llamándose entonces *carta acordada*.

En todo caso es la ley que mas debe meditarse, ya por los intereses que afianza, ya por lo inconveniente y aun peligroso, que es el sustituirla, ó modificarla con frecuencia. La historia suministraria ejemplos de todo; pero no escribimos historia, ni polémica política, sino legislacion. Véase el artículo **CONSTITUCIONES POLITICAS DE ESPAÑA**.

CONSTITUCIONAL. Lo que es conforme á la constitucion política del Estado. Así se dicen leyes constitucionales, prácticas constitucionales, etc. Aunque en general se denominan leyes constitucionales las que quedan insinuadas, llámanse así especialmente las que mas inmediatamente desarrollan la constitucion, que tambien suelen llamarse leyes orgánicas.

CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS. De autor desconocido, hay una coleccion que lleva este nombre, dividida en 8 libros, y formada, sin duda, en los tres primeros siglos de la Iglesia. A pesar de la denominacion, falta evidencia histórica y legal para atribuirlas á los Apóstoles, como se ha hecho. No la hay tampoco para atribuirlas á San Clemente, Papa, como tambien se ha verificado, y no obstante que en el cánon 85 de los llamados de los Apóstoles, despues de poner en boca del Papa San Clemente, dirigiéndose á los obispos, la enumeracion de los libros canónicos, se diga: *et præceptiones, quæ vobis, Episcopis, per me, Clementem, in libris octo nuncupatæ sunt.*

San Atanasio recomienda la lectura de estas constituciones: San Epifanio las cita con frecuencia y estimacion. Tal vez se alteraron despues, y por ello, ó como hemos dicho, por falta de evidencia legal sobre su orígen, las desechó el Concilio 3.° de Constantinopla, 6.° general.

Aun así, como leyenda, como historia en su género, encerrando, como encierran, la disciplina de los tres primeros siglos, su lectura es útil. Hay la edicion de Coteler, Amsterdan, 1721.

CONSTITUCIONES POLITICAS DE ESPAÑA. Como todo estado político, por el hecho de serlo, ó de estar constituido, tiene constitucion, España la ha tenido siempre desde la monarquía goda; pues constitucion política no es precisamente un libro; sino el modo en que un pueblo está constituido, la forma de su gobierno, sea

escrita, consuetudinaria, ó de cualquier otro modo, como decimos en el artículo **CONSTITUCION POLÍTICA**. El reseñar, pues, las diversas constituciones que se han conocido en España, y sus especies, como lo hacemos á continuacion por órden cronológico, es el objeto del presente artículo.

Constitucion de la Monarquía visigoda. La constitucion española, durante el período de la Monarquía visigoda, tenia su fundamento en las costumbres del pueblo, en algunas leyes del romano, en los concilios de Toledo y últimamente en el Fuero Juzgo.

La forma de gobierno era la monarquía electiva; y por lo comun ceñian la corona los caudillos mas valientes de aquel pueblo-soldado, unas veces por aclamacion popular, y otras á propuesta de los gefes principales del ejército. En alguna ocasion tomaba la monarquía el carácter de hereditaria, como sucedió en la familia de Teodoredo, perdiéndolo en el período siguiente, hasta la muerte de Alarico, y adquiriéndolo de nuevo, hasta cierto punto, por el hecho de haber asociado Leovigildo sus dos hijos á la gobernacion del Estado.

En el Fuero Juzgo aparece confirmada la forma electiva, pues la ley 8.ª del tít. 1.º dispuso que la sucesion en la corona, muerto el Monarca, recayera en «ome de linage de los godos, con el otorgamiento de los obispos, et de los godos mayores, et de todo el popolo.» Sin embargo, el concilio 4.º de Toledo habia eliminado al pueblo, segun el cánon 45, que dice: «Pois que el rey morre, los mayores de la gente de los godos, connos obispos de Dios, todos de souno, establescant concordadamentre, quien venga e no regno.»

El Monarca, no obstante su gran autoridad, estaba sujeto á las leyes, en cuanto á la administracion de justicia, como cualquier ciudadano, sin facultades para fallar en contra de las mismas, escepto el caso de indulto. En el Fuero Juzgo fué confirmada esta doctrina (ley 2.ª, título 1.º, libro 2.º), y en la 29 del mismo se estableció el gran principio de la responsabilidad judicial.

En los asuntos graves y que afectaban á todo el pueblo, consultaba el Rey á las juntas nacionales, decidiéndose en ellas ciertas peticiones de subsidios, la paz y la guerra, y otras de análoga importancia. Tambien se hallaba el poder Real moderado por los concilios de Toledo, en los cuales, á pesar de que su convocacion y aprobacion correspondia de hecho al Monarca, se confirmaban y sancionaban leyes, como lo comprueba el concilio 8.º, cánon 12. El concilio 5.º, cánon 8.º, «reservó al príncipe la potestad de ser piadoso con los criminales.» El concilio 13.º, cánon 3.º, sancionó cierta condonacion de tributos, hecha por el Monarca. Por el cánon 18 del concilio 3.º quedaron los jueces territoriales y los agentes del fisco sometidos á la inspeccion de los obispos, y facultados estos para suspender en sus funciones á los que cometieran abusos; y el concilio 4.º, cánon 32, declaró protectores de los pueblos y de los pobres á los obispos, que hasta en el órden civil ejercian una especie de jurisdiccion superior á la de los alcaldes y jueces, segun varias leyes del Fuero Juzgo, entre ellas la 3.ª, título 1.º, libro 12.

Tenia tambien el Monarca una especie de Consejo, denominado *órden ú oficio palatino*, compuesto de altos funcionarios de palacio, como el *Comes notariorum*, que ejercia un cargo análogo al de canciller; el *Comes spathariorum*, encargado de guardar la Real persona; el *Comes cubiculi*, que cuidaba del aposento de la familia Real, y el *Comes* ó *Magister equitum*, á quien correspondian los negocios relativos á la guerra, aunque algunos eruditos suponen que sus funciones eran análogas á las que en nuestros tiempos desempeña el *Caballerizo mayor* de Palacio. Asimismo habia unos á manera de secretarios de Hacienda (*Comes thesaurorum*), de Guerra (*Comes exercitus*) y de Justicia (*Comes largitionis*), á quienes competia la alta direccion de los negocios, y una *Curia*, compuesta de *curiales*, *primates* y *próceres*, que formaban la Córte del Rey, y cuyas firmas y títulos hallamos entre los asistentes á varios concilios de Toledo.

Era notable la organizacion del ejército: pues además del *Comes exercitus* ó *Comes militiæ*, que venia á ser el Ministro de la Guerra, habia *Duques*, que mandaban las

tropas de una provincia, con sus segundos jefes ó asesores, llamados *Gardingos*; *Condes*, que eran los jefes militares de las ciudades, con sus subalternos ó suplentes, á quienes titulaban *Vicarios*; siguiendo por órden gerárquico los *milenarios*, *quingentenarios*, *centenarios* y *decanos* ó *decuriones*, cuyos títulos indican el número de soldados que tenian respectivamente á sus órdenes; y por último, los *compulsores*, encargados de alentar á la tropa contra el enemigo, y los *anonarios*, que cuidaban de los víveres. Véase **CONDE: CONDESTABLE.**

En el órden administrativo habia tambien una organizacion completa, pues los *Condes*, además de sus atribuciones militares, ejercian jurisdiccion de carácter puramente civil en las ciudades, así como el *prepositus* y el *villicus*, respectivamente en las poblaciones de segundo órden y en las villas.

El municipio habia perdido algo de su antiguo esplendor; mas continuó teniendo grande influencia en la administracion de los intereses del pueblo, encomendados á los *priores locis*, *decemviros y duuviros*, habiendo un *edil*, comisionado de los caminos, fiestas, mercados, ferias y policía urbana; un *susceptor* ó *censitor*, á quien competia la recaudacion de los arbitrios municipales; un *defensor civitatis*, cuya obligacion era defender los intereses y derechos del municipio; y por último, *possesores*, cuya concurrencia con los *decuriones* ó *decemviros* era precisa, cuando se trataba de establecer nuevos impuestos.

Primitiva Constitucion de la Monarquía de Castilla. La Constitucion política, militar y administrativa del pueblo visigodo desapareció, al verificarse la invasion sarracena. Comenzó entonces á predominar, como era consiguiente, el elemento militar y aristocrático; crecieron en privilegios los nobles y ricos-homes con el establecimiento de los feudos y derechos dominicales; hasta que, deseando los Reyes contrarestar su escesiva influencia, comenzaron á dotar de fueros y exenciones á los principales reinos y ciudades; fueros conformes casi todos en los puntos de mas importancia, y encaminados á disminuir las cargas dominicales, ampliando los derechos y favoreciendo los intereses y aspiraciones del estado llano, creando los gremios, hermandades y cofradías, y admitiendo la representacion del pueblo en las córtes generales de los reinos, y su intervencion en los asuntos mas estrechamente ligados con sus propios intereses. A perfeccionar aquella legislacion, armonizándola y unificándola, vino el código de las Partidas, que hasta principios de nuestro siglo fué en el órden político la constitucion fundamental de España.

La forma de gobierno establecida por este código es la monarquía pura ó absoluta, aunque templada por la religion, por el culto á la justicia, por el amor á los ciudadanos y á la pátria, por el celo en pró de todos los intereses legítimos, y por las virtudes que deben resplandecer en la corona. La tiranía y los tiranos en ninguna parte han sido condenados tan elocuentemente como en la ley 10, tít. 1.° de la 2.ª Partida. La 5.ª, tít. 15 de la misma, prohibe la division y la enajenacion del señorío del Reino; pero la 8.ª, tít. 1.°, declara que tiene el Rey facultad para dar villas ó castillos por heredamiento á quien quisiere. La autoridad Real era de derecho divino, y el Reino propiedad del Monarca, segun las leyes 1.ª y 5.ª del citado título.

Desde que D. Ramiro, imitando el ejemplo de algunos Reyes godos, hizo elegir á su hijo D. Ordoño, sus descendientes siguieron la misma conducta, convirtiéndose de hecho en hereditaria la monarquía, sin que ninguna ley le diera carácter, y sin estar fijado, por consiguiente, el órden de sucesion en la Corona. La ley 2.ª, tít. 15 de la 2.ª Partida lo fijó; y la 3.ª del mismo título dispuso que la menor edad del Monarca terminase á los veinte años, siendo varon, y cuando se casara, siendo hembra la heredera del trono.

A pesar de que Alonso X habia otorgado fueros á Trujillo, Soria, Aguilar de Campos, Plasencia, Luarca y otros pueblos, ni una vez siquiera hallamos escrita en el código de las Partidas la palabra Córtes. Sin embargo, implícitamente son llamadas á reconocer al sucesor en la corona por las leyes 19 y 20, título 13 de la 2.ª Partida, y esplícitamente por la 5.ª, título 15 de la misma, pues ordena

que, muerto el Rey, «los mas honrrados omes del reyno, que y fueren, assi como los perlados, e los ricos omes, e los caualleros, e los fijosdalgo, e los omes buenos de las cibdades, e de las villas» presten homenaje al nuevo Monarca; y que, siendo este menor de catorce años, juren por él la defensa del reino. Es notable la ley 25 del título 13, que encarga al pueblo la guarda del Rey, no solo de los estraños, sino *de él mismo*: «la guarda que han de fazer a el de si mismo,» dice la ley, «es que non le dexen facer cosa a sabiendas, porque pierda el anima, nin que sea a mal estanza, o deshonrra de su cuerpo, o de su linaje, o a grand daño de su reyno. E esta guarda ha de ser fecha en dos maneras. Primeramente por consejo, mostrandole, e diciendole razones por que lo non deua facer. E la otra, por obra.»

Muy diferente de la moderna era la constitucion militar de aquellos tiempos. Hacian la guerra los castellanos á su costa, sin recibir salario del Rey ni del Estado, y cada uno tenia derecho á participar de las ganancias y despojos, en proporcion de los gastos que habia hecho y servicios que hubiera prestado, debiendo satisfacerse con preferencia á los soldados el daño, que en sus personas ó vestuario recibian. Las heridas y las muertes, para bien del alma de los que perecian en el campo del honor y para provecho de sus herederos, se tasaban cuidadosamente; y de la misma manera se señalaba la cantidad, que habia de distribuirse en premio de servicios estraordinarios y gloriosos, deduciendose la quinta parte del total de las ganancias, que era para el Rey, conforme á lo minuciosamente establecido en las leyes del título 26 de la 2.ª Partida.

Segun la 2.ª, título 1.º de la misma, el poder legislativo residia en el Monarca; pero la facultad de aplicar las leyes correspondia á los tribunales de justicia, compuestos de jueces ordinarios, y delegados, que estos nombraban ó ponian «para librar algund pleyto.» Se dieron garantías de todas clases á los litigantes; pues ademas de la responsabilidad judicial, solemnemente establecida, tenian los jueces obligacion de permanecer cincuenta dias en el lugar donde habian administrado justicia, «por facer derecho a todos aquellos, que dellos ouiessen recibido tuerto;» debiendo disponer que cada siete dias se publicasen pregones, llamando á las personas que se considerasen por ellos agraviadas ó perjudicadas. Así lo dispone la ley 6.ª, título 6.º de la 3.ª Partida.

Tal fué, con arreglo al código de D. Alfonso el Sábio, la constitucion política española, sirviéndole como de complemento las Córtes generales del Reino, segun las leyes que sobre este interesantísimo punto se insertaron en el título 7.º, libro 6.º de la Nueva Recopilacion, y las que se hallan en el título 8.º, libro 3.º de la Novísima.

La ley 2.ª, título 15 de la Partida 2.ª, una de las fundamentales de aquella constitucion, y norma luego de la sucesion en los mayorazgos, fué derogada por Felipe V, en virtud de su pragmática de 10 de Mayo de 1703, que es la ley 3.ª, título 1.º, libro 3.º de la Novísima Recopilacion, modificando el órden de sucesion en la Corona, prefiriendo á los varones, descendientes de varones, en línea recta ó trasversal, por órden riguroso de agnacion y primogenitura. La pragmática de 29 de Marzo, publicada en la *Gaceta* del 3 de Abril de 1830, restableció la ley de Partida. El 18 de Setiembre de 1832 firmó Fernando VII un decreto, derogando su pragmática de 1830; pero el 31 de Diciembre del mismo año 1832 rubricó otro decreto, anulando el de 18 de Setiembre, y desde entónces quedó en observancia la ley de Partida, confirmada por las Constituciones posteriores; salvo la actual, de 1869.

Constitucion de Bayona. La damos á conocer, como documento histórico meramente, pues se sabe que no llegó á regir.

Es la que en el Congreso reunido en Bayona, el 15 de Junio de 1808, votaron noventa y un diputados, convocados al efecto por medio de la *Gaceta*, con fecha 25 de Mayo del mismo año, y en cuya discusion emplearon doce sesiones.

Al frente del código de Bayona se leen estas palabras: «Decretamos la presente Constitucion, para que se guarde como ley funda-

mental de nuestros Estados, y como base del pacto que une á nuestros pueblos con Nos, y á Nos con nuestros pueblos:» y se halla dividida en 13 títulos y 146 artículos.

En él se proclama la Religion católica, apostólica, romana, como la religion esclusiva de la Nacion española; se establece el órden de sucesion en la Corona en favor de la familia de Bonaparte, debiendo el Rey titularse «por la gracia de Dios y la Constitucion del Estado;» se ordena la formacion de una regencia, durante la menor edad del Monarca, y se organiza el poder ejecutivo bajo la base de nueve Ministros responsables.

Prescribe que las Córtes se compongan de los tres brazos ó estamentos: el clero, representado por veinticinco arzobispos y obispos; la nobleza por otros tantos grandes de España, y el pueblo por ciento veintidos diputados de las provincias de España é Indias; debiendo ser elegidos unos treinta, poco mas ó menos, á propuesta de las universidades y juntas de comercio, y los demás por las provincias y ciudades con *voto en Córtes*. Habian de reunirse una vez cada tres años, por lo menos, debiendo deliberar en secreto; y sus facultades se reducian á representar contra los abusos de la administracion pública, discutir las leyes, tributos y presupuestos, y quejarse de la arbitrariedad en que incurriesen los Ministros.

Entre las Córtes y el Rey habia de establecerse un poder moderador, ó sea un Senado vitalicio é inamovible, compuesto de los Infantes de España, mayores de diez y ocho años, y de veinticuatro individuos nombrados por el Monarca entre los Ministros, embajadores, capitanes generales y consejeros reales y de Estado. El Senado tendria, entre otros, la facultad de suspender el Código fundamental, en casos de sublevacion ó de trastornos que amenazaran la seguridad del Reino, y tomar, á propuesta del Rey, las medidas estraordinarias que se considerasen necesarias; y seria tambien de su competencia el velar por la seguridad individual y por la libertad de imprenta, y el anular las elecciones de diputados en que se hubiesen cometido ilegalidades.

Al Consejo de Estado competia el exámen y redaccion de los proyectos de ley que se hubieran de presentar á las Córtes, y el conocimiento de las competencias de jurisdiccion entre las autoridades administrativas y judiciales, así como el de los asuntos contencioso-administrativos. Los Reales decretos sobre materias que debieran las Córtes discutir y examinar, tendrian fuerza de ley, siempre que se ventilasen en el Consejo de Estado, durante el interregno parlamentario.

Por último establece la unidad de legislacion en materia civil y criminal, la independencia é inamovilidad de los jueces y magistrados, la publicidad en los juicios criminales, la abolicion de los tribunales privilegiados, y la admision de todos los ciudadanos al desempeño de los empleos públicos.

Tales fueron las principales disposiciones de la Constitucion otorgada en Bayona, que José Bonaparte entregó al arzobispo de Burgos, presidente del Congreso allí reunido, y que no llegó á regir en España, por la breve permanencia de aquella dinastía en el trono de San Fernando.

Se halla al principio de la coleccion de decretos de José Napoleon, publicada en 1810.

Constitucion de 1812. La Constitucion política de la Monarquía española, que poco despues hicieron las Córtes de Cádiz, está fechada en la misma ciudad, á 18 de Marzo de 1812. Consta de 10 títulos, divididos en capítulos, y 384 artículos.

En ella se declara que «la soberanía reside esencialmente en la nacion» (art. 3.°), y á los españoles obligados á contribuir con sus bienes y personas á los gastos del Estado y defensa de la patria (art. 8.° y 9.°). La Religion de la nacion española «es y será perpétuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra» (art. 12). Se declara que el Gobierno de España es una monarquía moderada hereditaria (art. 14), y que la potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey; la de ejecutarlas en el Monarca, y la de aplicarlas en los tribunales (art. 15, 16 y 17).

Constituia las Córtes una sola cámara,

compuesta de un diputado por cada 60,000 almas, elegidos indirectamente, en juntas parroquiales, locales ó de partido y provinciales. Para ser diputado se requeria la cualidad de ciudadano en el ejercicio de sus derechos, y ser mayor de veinticinco años; natural de la provincia, ó avecindado y residente en ella por espacio de siete años, teniendo además una renta procedente de bienes propios, cuya cuantía no se espresó (art. 31, 34 y 91). No podian ser diputados los Secretarios del despacho, los consejeros de estado, los empleados de la Real casa, ni los estranjeros (art. 95 y 96), ni los funcionarios públicos, por las provincias en que ejercian sus cargos respectivos (art. 97).

Habria una diputacion permanente de Córtes (art. 157); y estas se habian de reunir todos los años en la capital del Reino, ó en otro lugar que no distase mas de doce leguas, debiendo durar sus sesiones tres meses consecutivos, desde el dia 1.° de Marzo, y pudiendo prorrogarse un mes mas, á peticion del Rey ó por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados (art. 104 hasta 107).

Tenian las Córtes facultades para proponer y decretar las leyes, interpretándolas y derogándolas en caso necesario; recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y á la regencia; resolver cualquiera duda, de hecho ó de derecho, que ocurriese en órden á la sucesion en la Corona; elegir la regencia del Reino y determinar sus atribuciones; reconocer públicamente al Príncipe de Astúrias; nombrar tutor al Rey menor; aprobar, antes de su ratificacion, los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de comercio; conceder ó negar la admision de tropas estranjeras en el Reino; decretar la creacion y supresion de plazas en los tribunales que la Constitucion establece, y la creacion y supresion de los oficios públicos; fijar todos los años, á propuesta del Rey, las fuerzas de mar y tierra, determinando las que se habian de tener en pié en tiempo de paz, y su aumento en caso de guerra; dar ordenanzas al ejército, á la armada y á la milicia nacional; fijar los gastos de la administracion pública; establecer anualmente las contribuciones y los impuestos; tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la Nacion; aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias; examinar y aprobar las cuentas de la inversion de los caudales públicos; establecer las aduanas y los aranceles; disponer lo conveniente para la administracion, conservacion y enajenacion de los bienes nacionales; determinar el valor, peso, ley, tipo y denominacion de las monedas; adoptar el sistema que se juzgare mas cómodo y justo de pesos y medidas; promover y fomentar toda especie de industria; establecer el plan general de enseñanza pública, y aprobar el que se forme para la educacion del Príncipe de Asturias; aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del reino; protejer la libertad política de la imprenta; hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del despacho y demás empleados públicos, y dar ó negar su consentimiento en todos los casos y actos en que fuera necesario, segun la Constitucion (art. 131).

El diputado gozaba de ámplia iniciativa (art. 132 y sigs.).

La sancion de las leyes correspondia al Monarca, el cual podia negarla dos veces. Si por tercera vez aprobaban las Córtes un mismo proyecto de ley, se entendia *ipso facto* sancionado por el Monarca (arts. 142, 148 y 149). Tambien le correspondia la promulgacion de las leyes (art. 154).

Habria Córtes estraordinarias, convocadas por la comision permanente, cuando vacase la Corona ó se imposibilitase el Monarca, ó cuando este lo juzgara conveniente para tratar de asuntos árduos (art. 162).

La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad (artículo 168). La potestad de hacer ejecutar las leyes, reside esclusivamente en el Rey (art. 170); y sus facultades, además de la sancion y promulgacion de las leyes, eran estensivas á espedir los decretos, reglamentos é instrucciones, que crea conducentes para la ejecucion de las leyes; cuidar de que se administre pronta y cumplidamente la justicia; declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documen-

tada á las Córtes; nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado; proveer todos los empleos civiles y militares; presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de Real patronato, á propuesta del Consejo de Estado; conceder honores y distinciones, con arreglo á las leyes; mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales; disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga; dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules; cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre; decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administracion pública; indultar á los criminales, con arreglo á las leyes; proponer leyes y reformas á las Córtes para su exámen; conceder el pase, ó retener los decretos conciliares y bulas pontificias, con el consentimiento de las Córtes, si contienen disposiciones generales, ú oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares ó gubernativos, y, si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decision al Supremo Tribunal de Justicia, para que resuelva con arreglo á las leyes; por último, nombrar y separar libremente los Secretarios de Estado y del despacho (art. 171).

La autoridad y facultades del Monarca están restringidas en varios casos, espresados en el art. 172. A su advenimiento al trono, habia de jurar con arreglo á la fórmula establecida en el 173.

Declarada hereditaria la Monarquía (artículo 174), se fijó en el 180 el órden de sucesion en favor de los descendientes legítimos de D. Fernando VII, así varones como hembras, prohibiéndose por el 183 que estas se casaran sin consentimiento de las Córtes.

La menor edad del Rey se fijó en los diez y ocho años (art. 185), debiendo ser gobernado el Reino, durante ella, por una Regencia, como tambien en el caso de hallarse imposibilitado el Monarca (arts. 186 y 187). Las facultades de los Regentes y tutores y sus relaciones con las Córtes, así como lo relativo á la Real familia y reconocimiento del Príncipe de Asturias por las mismas, son objeto de los artículos 188 y siguientes hasta el 212.

La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, pertenece esclusivamente á los tribunales (art. 242), no pudiendo ningun español ser juzgado sino por el competente, determinado con anterioridad por la ley (247), y no habiendo mas que un fuero, escepto el eclesiástico y el militar (artículos 248, 249 y 250). Se declaró inamovible la magistratura, y que no pudieran ser depuestos los magistrados y jueces, sino por ciertas causas, y con intervencion del Consejo de Estado (arts. 252 y 253).

Corresponde á las Audiencias el conocer en todas las causas civiles y criminales en segunda y tercera instancia (art. 263; debiendo haber en la córte un Tribunal Supremo de Justicia (art. 259), con facultades para dirimir las competencias de las Audiencias entre sí y con los tribunales especiales; juzgar á los Secretarios de Estado y del despacho, cuando las Córtes decretaren haber lugar á la formacion de causa; conocer de todas las de separacion y suspension de los consejeros de Estado y magistrados de las Audiencias, y de todas las criminales contra los mismos y contra los individuos del propio Tribunal Supremo; conocer tambien de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella, de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real patronato, de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte, y de los recursos de nulidad; oir las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, consultando sobre ellas al Monarca para que promueva la conveniente declaracion de las Córtes, y promover la pronta administracion de justicia (art. 261).

La administracion de justicia en lo civil y criminal; el gobierno de los pueblos por los ayuntamientos, gobernadores políticos y diputaciones provinciales; la materia de contribuciones, la fuerza militar, las milicias nacionales y la instruccion pública, asuntos pro-

pios de leyes especiales, ocupan los capítulos 2.° y 3.° del título 5.°, y los títulos 6.°, 8.° y 9.° de la Constitucion de 1812, cuyo título 10 y último establece el modo de proceder para introducir variaciones en la misma, siendo notable su art. 375, que dice: «Hasta pasados ocho años despues de hallarse puesta en práctica la Constitucion en todas sus partes, no se podrá proponer alteracion, adicion ni reforma en ninguno de sus artículos.»

El dia 4 de Mayo de 1814, de regreso de Francia, publicó Fernando VII en Valencia este decreto-proclama: «Mi Real ánimo es, no solamente no jurar ni acceder á dicha Constitucion, ni á decreto alguno de las Córtes generales y estraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas.....; sino el de declarar aquella Constitucion y aquellos decretos, nulos y de ningun valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo.»

Por decreto de 7 de Marzo de 1820 decidió este Monarca jurar la Constitucion, restablecida de 1812.

El 1.° de Octubre de 1823, retirado el Rey á Cádiz, espidió en el Puerto de Santa María otro decreto, declarando «nulos y de ningun valor todos los actos del Gobierno, llamado constitucional (de cualquier clase y condicion que sean), que ha dominado á mis pueblos desde el dia 7 de Marzo de 1820, hasta hoy 1.° de Octubre de 1823.»

A poco regresó el Rey á Madrid; y la Constitucion continuó suprimida, hasta que el 12 de Agosto de 1836, hallándose la córte en la Granja, por consecuencia de un movimiento militar, la Reina Gobernadora mandó publicar, y se publicó y rigió la Constitucion de 1812, segun en el Real decreto se prevenia, hasta que reunidas Córtes constituyentes resolviesen lo que creyeren mas conveniente, que fué el formar una nueva Constitucion, y fué la de 1837, de que hablamos despues.

Estatuto Real. En los primeros dias del reinado de Doña Isabel II se publicó un decreto de la Reina Regente, en Aranjuez, á 10 de Abril de 1834, mandando promulgar con la solemnidad debida el *Estatuto Real.*

De 50 artículos, distribuidos en cinco títulos, se componia aquella nueva constitucion, cuyo tenor sustancial es el siguiente:

Conforme á su art. 2.°, las Córtes generales se componen de dos estamentos, el de *próceres* y el de *procuradores del Reino.* El primero se forma de arzobispos y obispos, Grandes de España, títulos de Castilla, altos dignatarios y hombres célebres en el mundo literario (artículo 3.°). Los próceres son elegidos por el Rey (art. 7.°); la dignidad de los mismos es vitalicia y hereditaria; en los Grandes de España, próceres natos.

El estamento de procuradores, cuyo cargo no ha de durar mas de tres años, se compone de los elegidos en la forma que se estableciera, requiriéndose para ser procurador, entre otras circunstancias, la edad de 30 años, y una renta de 12,000 rs. (art. 13 y 14). Los presidentes y vice-presidentes de ambos estamentos serian nombrados por el Monarca (art. 12 y 21).

Al Rey esclusivamente (art. 24) correspondia convocar, suspender y disolver las Córtes, las cuales se reunirán (art. 27) despues de la muerte del Monarca, para que su sucesor jure la observancia de las leyes, y reciba de las Córtes el debido juramento de fidelidad y obediencia. Igualmente se convocarán (art. 28) cuando el Príncipe ó la Princesa, que haya heredado la Corona, sea menor de edad, y cuando ocurra algun negocio árduo, cuya gravedad, á juicio del Rey, exija consultarlas (art. 30).

Para la formacion de las leyes se requiere (art. 33) la aprobacion de ambos estamentos y la sancion del Rey; no debiendo exigirse tributos ni contribuciones de ninguna clase, sin que á propuesta del Monarca los hubiesen votado las Córtes (art. 34). Las contribuciones no podrán imponerse, sino por el término de dos años, cuando mas, y antes de ese plazo deben ser votadas nuevamente por las Córtes, á las cuales presentará el Ministro de Hacienda el presupuesto de gastos y los medios de satisfacerlos, y los respectivos Secretarios del despacho una esposicion, manifestando el estado de los varios ramos de la administracion pública (arts. 35 y 36).

Disueltas las Córtes, habrán de reunirse otras antes del término de un año (art. 44). Rigió el Estatuto hasta la Constitucion de 1837.

Constitucion de 1837. Las Córtes Constituyentes de 1837, forman la nueva Constitucion, que lleva el nombre del año en que se publicó, habiéndolo sido el 8 de Junio de 1837.

Consta de 77 artículos y dos adicionales. En ella se establece la Monarquía constitucional, segun espondremos. Empieza estableciendo la libertad de imprenta (art. 2.°), el derecho de peticion (art. 3.°), la unidad de fueros (art. 4.°), la seguridad de las personas y del domicilio (arts. 7.° y 8.°), y se declaró á la Nacion obligada á mantener el culto y los ministros de la Religion católica (art. 11).

La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey; y las Córtes se componen de dos cuerpos colegisladores, el Senado y el Congreso de los diputados, iguales en facultades (arts. 12 y 13). Los senadores son nombrados por el Rey, á propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados á Córtes (art. 15), y las provincias elegirán un diputado por cada cincuenta mil almas, por el método directo (art. 21 y 22). El Senado se renovará por terceras partes, cada vez que haya elecciones generales de diputados (art. 19).

Las Córtes se reunen todos los años, correspondiendo al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligacion, en este caso, de convocar otras y reunirlas dentro de tres meses; y si el Rey dejare de reunir algun año las Córtes, antes del 1.° de Diciembre, se juntarán precisamente en este dia (arts. 26 y 27). Cuando vaque el trono ó se imposibilite el Monarca para el gobierno, se reunirán Córtes estraordinarias (art. 28).

El Rey y cada uno de los cuerpos colegisladores tienen la iniciativa de las leyes; y las relativas á contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los Diputados (arts. 36 y 37). Las Córtes tienen facultades para recibir al Rey, al sucesor inmediato en la Corona, y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitucion y las leyes; resolver cualquier duda, de hecho ó de derecho, que ocurra en órden á la sucesion en la Corona; elegir Regente ó Regencia del Reino, y nombrar tutor al Rey menor, cuando la Constitucion lo previene, y hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgados por el Senado (artículo 40).

La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los Ministros (art. 44). La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se estiende á todo cuanto conduce á la conservacion del órden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo esterior. Además sanciona y promulga las leyes, y le corresponde espedir los decretos, reglamentos é instrucciones conducentes para su ejecucion; cuidar de que se administre pronta y cumplidamente la justicia; indultar á los delicuentes con arreglo á las leyes; declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes; disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga; dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias; cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre; decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administracion pública; nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes, y nombrar y separar libremente sus Ministros (arts. 45, 46 y 47).

El Rey necesita estar autorizado por una ley especial, para enajenar, ceder ó permutar cualquiera parte del territorio español; para admitir tropas estranjeras en el reino; para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, y los que estipulen dar subsidios á alguna potencia estranjera; para ausentarse del Reino; para contraer matrimonio y permitir que lo contraigan las personas que sean súbditos suyos y estén llamadas por la Constitucion á suceder en el trono, y para abdicar la Corona en su inmediato sucesor (art. 48).

Los arts. 50 y siguientes se refieren al ór-

den de suceder en la Corona. El Rey es menor hasta cumplir catorce años, debiendo haber durante su minoridad una Regencia, de una, tres ó cinco personas, nombrada por las Córtes; y gobernarán interinamente el padre ó la madre del Rey, ó en su defecto, el Consejo de Ministros. El tutor del Monarca puede ser nombrado por el Rey difunto en su testamento; no haciéndolo, á las Córtes corresponde el nombrarlo, no pudiendo estar reunidos los cargos de regente y de tutor en una misma persona, escepto el padre ó la madre del Rey (art. 56 hasta el 60).

A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales; y ningun magistrado ó juez puede ser depuesto, sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino por auto judicial, ó en virtud de órden del Rey, cuando este, con motivos fundados, lo mande juzgar por el tribunal competente. Los jueces son responsables personalmente de toda infraccion de ley que cometan (arts. 63, 66 y 67).

Todos los años presentará el Gobierno á las Córtes el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente; el plan de las contribuciones y medios para llenarlos, y las cuentas de la recaudacion é inversion de los caudales públicos, para su exámen y aprobacion; no pudiendo imponerse ni cobrarse ninguna contribucion ni arbitrio, que no esté autorizado por una ley (art. 72 y 73). Las Córtes fijarán todos los años, á propuesta del Rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra, y habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional (art. 76 y 77).

En los dos artículos adicionales se anuncia el juicio por jurados para toda clase de delitos, y se dispone que las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.

Rigió esta Constitucion hasta la de 1845.

Constitucion de 1845. Las Córtes generales de 1844 vinieron autorizadas para modificar la Constitucion de 1837. La modificaron en efecto, y la modificacion fué tal, que produjo una nueva Constitucion, que lleva tambien el nombre del año de su publicacion, habiéndolo sido el 23 de Mayo de 1845.

En ella fué suprimido el jurado. Se introdujo una importante reforma en la organizacion del Senado, cuyos miembros, en vez de ser elegidos y propuestos por los pueblos, serian nombrados por el Rey (art. 14), concurriendo en ellos determinadas circunstancias personales, ó de categoría (art. 15). Se declaró vitalicio el cargo de senador (artículo 17); y se concedió al Senado, además de las facultades legistivas y la de juzgar á los Ministros, segun el art. 40 de la Constitucion de 1837, la de conocer de los delitos graves contra la persona ó dignidad del Rey ó contra la seguridad del Estado, y la de juzgar á los indivíduos de su seno, en los casos y forma que determinaren las leyes (art. 19).

Los diputados habian de ser elegidos por los colegios ó juntas (art. 20), en vez de las provincias, y por cinco años (art. 24), en lugar de tres que fijaba la Constitucion de 1837; y quedó suprimido el precepto que la misma en su art. 27 imponia á las Córtes, para que se reuniesen el 1.° de Diciembre todos los años, si el Rey no las convocaba antes.

Tambien se suprimió el párrafo 4.° del artículo 48 de la Constitucion de 1837, que prescribia la necesidad de una ley que autorizara al Monarca para ausentarse del Reino; se modificó el art. 71, relativo á la intervencion del poder ejecutivo en el nombramiento de alcaldes, y se eliminó el 77, referente á la milicia nacional. Pero la mas importante reforma introducida en la Constitucion de 1845, fué la supresion del párrafo 5.° del art. 48 de la de 1837, que exigia una ley especial que autorizase al Monarca y á sus presuntos sucesores en la Corona, para contraer matrimonio. En su lugar se estableció el art. 47, disponiéndose que el Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Córtes, á cuya aprobacion se someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser objeto de una ley, observándose lo mismo respecto del matrimonio del inmediato sucesor, el cual ni el Rey pueden contraerlo con persona que por la ley esté escluida de la sucesion de la Corona.

Con el movimiento revolucionario de 1854,

y reunidas Córtes Constituyentes, cesó esta Constitucion, formando aquellas nueva Constitucion, que no llegó á promulgarse; y antes, disueltas las Córtes por Real decreto de 2 de Setiembre de 1866, por otro del 18 del mismo, fué restablecida la Constitucion de 1845, con una *Acta adicional*, que habria de reputarse parte de la Constitucion, por lo que daremos de ella una ligera idea.

Constaba de 16 artículos, disponiéndose por el 1.° que la calificacion de los delitos de imprenta corresponde á los jurados. El 2.° determinó que, promulgada la ley de que trata el art. 8.° de la Constitucion (la de suspension de garantías), el territorio á que aquella se aplique, se regirá por la ley de órden público establecida de antemano; pero ni en una ni en otra ley se podrá autorizar al Gobierno para estrañar del reino á los españoles, ni para deportarlos ni desterrarlos fuera de la Península.

Durante cada año estarán reunidas las Córtes, lo menos cuatro meses, contados desde el dia en que se constituye definitivamente el Congreso (art. 6.°)

Además de los casos enumerados en el artículo 46 de la Constitucion, el Rey necesitará estar autorizado por una ley especial, para conceder indultos generales y amnistías, para enajenar en todo ó en parte el patrimonio de la Corona, y para contraer matrimonio y permitir que lo contraigan los que sean súbditos suyos y estén llamados por la Constitucion á sucederle en la Corona (art. 9 y 10). Estas últimas disposiciones están copiadas de la Constitucion de 1837.

La ley orgánica de tribunales determinará los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrá el Rey trasladar, jubilar y declarar cesantes á los magistrados y jueces (art. 12). Dentro de los ocho dias siguientes á la apertura de las Córtes, el Gobierno presentará al Congreso las cuentas del penúltimo año y el presupuesto para el próximo venidero; y las Córtes deliberarán sobre la ley á que se refiere el art. 79 de la Constitucion (la que fija la fuerza militar permanente de mar y tierra), antes que sobre la ley de presupuestos (arts. 15 y 16).

En 15 de Julio de 1857 fué sancionada una ley, reformando los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 28 de la Constitucion, y se dió nueva organizacion al Senado, al cual pertenecerian por derecho propio los hijos del Rey y del sucesor inmediato á la Corona, teniendo veinticinco años, los arzobispos y el patriarca de las Indias, los presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia y de Guerra y Marina, los capitanes generales de ejército y armada, y los grandes de España que acreditasen una renta de 200,000 reales (art. 14).

Los alcaldes y regidores serán nombrados directa é inmediatamente por los vecinos contribuyentes (art. 73).

Dentro de los ocho dias siguientes á la constitucion del Congreso, presentará el Gobierno el presupuesto general de gastos é ingresos del Estado para el inmediato año económico (art. 79), debiendo ser precisamente discutido y votado (art. 80), sin cuyo requisito no se puede exigir ninguna contribucion ó arbitrio, bajo ciertas penas (art. 81).

Finalmente, el art. 85 determina que haya en cada provincia cuerpos de milicia nacional; y el 87 declara que la Constitucion puede ser reformada, siendo parte integrante de la misma y considerándose, para su reforma y todos sus efectos, como artículos constitucionales, las leyes electoral, de relaciones entre los cuerpos colegisladores, del Consejo de Estado, de gobierno y administracion provincial y municipal, de organizacion de los tribunales, de imprenta y de milicia nacional (art. 92).

Tambien se limitaron las categorías para el cargo de senador. Esta dignidad se declaró hereditaria en los Grandes de España (artículo 17), y para perpetuarla se autorizó la constitucion de vinculaciones (art. 18), mediante una ley que no llegó á publicarse. Finalmente, se dispuso por el art. 28, que los reglamentos del Senado y del Congreso fuesen objeto de una ley, que tampoco se llegó á formar.

Con fecha 18 de Abril de 1864 fué sancionada otra ley, derogando la de reforma constitucional de 1857, y restableciendo en su integridad la Constitucion de 1845; aunque

por una disposicion transitoria se otorgó el plazo de un año á los Grandes de España que aspirasen por derecho propio á la senaduría, para que dentro de él la solicitasen.

Con los incidentes mencionados, rigió la Constitucion de 1845, hasta Setiembre de 1868, en que un movimiento revolucionario trajo el destronamiento de la dinastía reinante, y llamadas y elegidas por sufragio universal Cortes Constituyentes, formaron la nueva Constitucion de que vamos á hablar.

Constitucion de 1869. Fué promulgada el 6 de Junio de dicho año. Consta de 112 artículos y dos disposiciones adicionales. Es *monárquico-democrática*. No llama dinastía.

En ella se dispone que ningun español podrá ser preso, sino en virtud de mandamiento del juez competente (art. 4.°); ni podrá nadie entrar en su domicilio, sin su consentimiento, á no ser por decreto de juez competente, en cuyo caso la diligencia se practicará de dia (art. 5.°); ni español ninguno podrá ser compelido á mudar de domicilio ó de residencia, sino en virtud de sentencia ejecutoria (art. 6.°); ni detenerse ni abrirse en ningun caso, por la autoridad gubernativa, la correspondencia (art. 7.°). Todo auto de prision, de registro de morada, ó de detencion de la correspondencia escrita ó telegráfica, será motivado (art. 8.°).

Ningun español podrá ser privado de los derechos de votar en las elecciones, emitir libremente sus opiniones é ideas, reunirse pacíficamente, asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios á la moral pública, y dirigir peticiones á las Córtes, al Rey y á las autoridades (artículos 16 y 17).

«La nacion se obliga, dice el art. 21, á mantener el culto y los ministros de la Religion católica. El ejercicio público ó privado de cualquiera otro culto queda garantido á todos los estranjeros residentes en España, sin mas limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religion que la católica, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.»

No se establecerá disposicion alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos, ni la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos (art. 22); y todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instruccion ó de educacion, sin prévia licencia (art. 24).

La soberanía reside esencialmente en la Nacion, de la cual emanan todos los poderes (art. 32). La forma de Gobierno de la Nacion española es la Monarquía. La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes. El Rey sanciona y promulga las leyes. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros. Los tribunales ejercen el poder judicial. La gestion de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente á los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo á las leyes (art. 33 al 37).

Las Córtes se componen de dos cuerpos colegisladores, Senado y Congreso, iguales en facultades, escepto en los casos previstos en la Constitucion (art. 38), debiendo estar reunidas á lo menos cuatro meses cada año (art. 45), renovándose cada tres años el Congreso totalmente, y el Senado por cuartas partes (art. 39).

Acerca de la celebracion y facultades de las Córtes, nada se dice que no conste en las Constituciones de 1812 ó 1837.

Habrá cuatro senadores por cada provincia (art. 60), y un diputado por cada 40,000 almas (art. 65).

Una sola vez en cada legislatura podrá el Rey suspender las Córtes sin el consentimiento de las mismas (art. 71); y en el caso de disolucion, el Real decreto contendrá necesariamente la convocatoria de otras para dentro de tres meses (art. 72).

Las facultades del Monarca y sus limitaciones vienen á ser las mismas que estableció la Constitucion de 1837; y casi iguales las disposiciones relativas á la regencia y tutoría del Rey.

Respecto del poder judicial, se establece el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que la ley determine (art. 93). El Rey nombra los magistrados y jueces á propuesta del Consejo de

Estado y con arreglo á la ley orgánica de tribunales, escepto la cuarta parte de los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo, aunque con audiencia del Consejo de Estado; debiendo ingresarse en la carrera judicial por oposicion (art. 94). Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por sentencia ejecutoria, ó por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, prévia consulta al Consejo de Estado, ni ser trasladados sino por Real decreto espedido con los mismos trámites. Los tribunales, bajo su responsabilidad, no darán posesion á los que no hubiesen sido nombrados con arreglo á la Constitucion y á las leyes. Los ascensos en la carrera judicial se harán á consulta del Consejo de Estado (arts. 95, 96 y 97).

Las provincias de Ultramar tienen sus representantes en las Córtes, y se reformará el régimen de las situadas en el archipiélalo filipino (arts. 108 y 109).

Por último, en el título XI se establece el procedimiento para la reforma de la Constitucion, de la cual será parte integrante, segun dispone el primero de los artículos transitorios, la ley sobre eleccion del Monarca que hubiese de ocupar el trono, vacante á la fecha en que fué promulgada la Constitucion, constituyéndose entre tanto una regencia.

Proyectos de Constitucion. Para completar el cuadro, mencionamos á continuacion los proyectos de Constitucion, que no salieron de tal estado.

1852. La *Gaceta* del 3 de Diciembre de 1852, en un suplemento, dió á luz un proyecto de Constitucion, compuesto de seis títulos y 42 artículos, mas uno adicional, disponiendo que las provincias de Ultramar se rigiesen, incluso las islas Canarias, por leyes especiales; y aunque no pasó de proyecto, vamos á dar una ligerísima idea del mismo, atendiendo á su importancia.

En él se declaraba Religion del Estado la católica, apostólica, romana; pero las relaciones entre ambas potestades habian de fijarse por el Romano Pontífice y el Monarca español, mediante un concordato con fuerza de ley.

En dicho proyecto de Constitucion no se hablaba de la igualdad de los españoles para el desempeño de cargos públicos, ni de la libertad de imprenta, ni del derecho de peticion, ni de la inmunidad del domicilio, ni de la seguridad de las personas; si bien estos últimos asuntos eran objeto de un proyecto de ley, compuesto de 11 artículos, que se insertaba en el mismo suplemento de la *Gaceta* del 3 de Diciembre.

Proponíase tambien, que el presupuesto general de la nacion fuese permanente, no pudiendo introducirse en él ninguna variacion ó reforma, creando ni suprimiendo impuestos, sino mediante una ley, y despues que las Córtes hubiesen examinado cada año la cuenta de los ingresos y gastos del anterior. Además se omitia el artículo, por el cual en otras Constituciones se daba á las Córtes el derecho de fijar anualmente las fuerzas militares de mar y tierra. En cambio se declaraba que el Rey, en casos urgentes y salva la aprobacion de las Córtes, podria tomar por sí medidas legislativas.

Otros proyectos de ley acompañaban al de Constitucion, entre ellos uno sobre la organizacion del Senado, que constaba de 13 artículos, y otro, compuesto de seis títulos y 69 artículos, sobre elecciones de Diputados. El Senado habia de componerse de senadores hereditarios, cuales eran los Grandes de España que pagasen lo menos treinta mil reales de contribucion; senadores natos, á cuya clase pertenecian el Príncipe de Astúrias, los Infantes de España, los cardenales, los capitanes generales de ejército, el patriarca de las Indias, los arzobispos, y los seis obispos y los seis tenientes generales mas antiguos; y senadores vitalicios, nombrados por la corona, de entre las diversas carreras y categorías del Estado. A ciento setenta y uno habia de quedar reducido el número de los Diputados, exigiéndose para este cargo la edad de treinta años y el pagar tres mil y seiscientos reales de contribucion. Las sesiones debian celebrarse á puerta cerrada, escepto la sesion régia de apertura de las Córtes, ó cuando el Senado se reuniese como tribunal. El Rey nombraba el presidente y vice-presidente del Congreso.

Los diputados y senadores tenian derecho á presentar proposiciones. El mensaje á la corona debia votarse, prévios un solo discurso en contra y otro en pró.

Además de estos proyectos, vieron la luz en la citada *Gaceta* del 3 de Diciembre de 1852, uno para el régimen de los cuerpos colegisladores, con nueve títulos y setenta y cuatro artículos, y otro, de trece artículos, sobre las relaciones entre los mismos cuerpos colegisladores. Y finalmente, otro con dos solos artículos, sobre la seguridad de la propiedad; otro sobre órden público, compuesto de nueve artículos, y otro, con cuatro capítulos y quince artículos, sobre grandezas y títulos del reino, restableciendo las vinculaciones. Todos estos proyectos de ley formaban un sistema completo de política y gobierno.

1853. El conde de Alcoy, sucesor de Don Juan Bravo Murillo en la presidencia del Consejo de Ministros, fué autorizado por decreto de 29 de Marzo de 1853, para someter á la deliberacion de las Córtes otro proyecto de reforma, menos radical, derogando los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Constitucion; y disponiendo que el Senado se compusiera de senadores natos, hereditarios y vitalicios, perteneciendo á la primera clase el Príncipe de Astúrias, los Infantes de España, los cardenales, los capitanes generales, el Patriarca de las Indias y los arzobispos; á la segunda clase los Grandes de España á quienes el Rey nombrase, con tal que reunieran ciertas circunstancias; y á la tercera clase los nombrados por la Corona, siendo personas de categorías determinadas.

El citado proyecto derogaba asimismo el artículo 28 de la Constitucion, sustituyéndolo con otro, en cuya virtud el reglamento para el gobierno interior de los Cuerpos colegisladores habia de ser objeto de una ley. Tambien derogaba el párrafo 5.° del art. 45, concediendo al Rey la facultad de disponer, como jefe supremo del ejército, de la fuerza armada, distribuyéndola de la manera conveniente; y el art. 54, en virtud de cuya nueva redaccion las personas llamadas á la sucesion en la Corona, que sean incapaces para gobernar, habian de quedar escluidas de dicha sucesion, por una ley. Finalmente, el art. 75 de la Constitucion era adicionado con este párrafo: «No se someterá á discusion sino aquella parte de los presupuestos que no es permanente por su propia naturaleza, y en la que pueden hacer los Cuerpos colegisladores las alteraciones que estimen convenientes.»

1854 á 1856. Las Córtes Constituyentes, reunidas el 8 de Noviembre de 1854, votaron una nueva constitucion, que no fué promulgada. Esto no obstante, daremos una idea de sus principales disposiciones.

Consta de 15 títulos y 92 artículos, mas uno transitorio.

En el 1.° se declaraba que «todos los poderes públicos emanan de la Nacion, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece esclusivamente á la Nacion el derecho de establecer sus leyes fundamentales.»

En el art. 3.°, relativo á la libertad de imprenta, se establece para los delitos de la misma el jurado. No se podrá imponer la pena capital por delitos políticos (art. 11), ni la de confiscacion de bienes por ningun delito (artículo 12). La Nacion se obliga á mantener y proteger el culto y los ministros de la Religion católica, que profesan los españoles; pero ningun español ni estranjero podrá ser perseguido por sus opiniones ó creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la Religion (art. 14).

Los senadores, cuyo número será igual á las tres quintas partes, de los diputados, deben ser elegidos del mismo modo y por los mismos electores que estos, reuniendo ciertas condiciones (art. 17, 18 y 20); debiendo renovarse el Senado por cuartas partes, cada vez que se procediese á eleccion general de diputados (art. 22). Los artículos 24 hasta el 27 se refieren al Congreso de los diputados, y prescriben lo mismo que la constitucion de 1837.

Lo único notable que en la de 1856 encontramos respecto de la celebracion y facultades de las Córtes, son los artículos 28, 29, 42 y 47. Por el primero se dispone que las Córtes se reunan lo mas tarde el 1.° de Noviembre todos los años, correspondiendo al Rey

convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los diputados; pero con la obligacion, en este último caso, de convocar otras Córtes y reunirlas dentro de dos meses; y por el 29 se declara que estarán reunidas cada año, á lo menos cuatro meses consecutivos. El 42 concede á las Córtes la facultad de nombrar los ministros del Tribunal de Cuentas, y á este la de proponer al Rey, para su nombramiento, los contadores y dependientes del mismo. El 47 determina que haya una diputacion permanente de Córtes, compuesta de cinco diputados y cuatro senadores que, cuando las Córtes no estén reunidas, velará por la observancia de la Constitucion y por la seguridad individual, y convocará las Córtes cuando vacare la Corona, ó el Rey se imposibilitare para el gobierno; cuando se mande exigir alguna contribucion ó préstamo que no esté aprobado por la ley de presupuestos ú otro especial, y cuando, suspendidas en una ó mas provincias las garantías establecidas en el art. 8.°, dejase el Rey de convocarlas.

Segun el art. 52, las facultades del Monarca serian las mismas que se establecieron en la Constitucion de 1837; habiéndose añadido á las limitaciones de la autoridad Real, dos nuevas en la Constitucion de 1856, á saber: la prohibicion de conceder amnistías, y la de enajenar en todo ó en parte los bienes del patrimonio de la Corona (art. 53).

En el art. 73 se anunció que las leyes determinarian la época y el modo en que habia de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos.

Queda dicho que disueltas las Córtes constituyentes, la nueva Constitucion no fué sancionada.

CONSTITUCIONES SINODALES. Las que en el concilio episcopal, sinodal ó diocesano, forma el obispo con su clero, para el régimen de la diócesis. Seria de desear que no faltasen en ninguna, y es la verdad que son muchas las que las tienen. Son desde luego una coleccion ordenada de reglas numerosas y oportunas sobre disciplina esterna é interna. Las solemnidades con que se celebra el sínodo, la concurrencia y asentimiento de todo el clero de la diócesis, las reviste de una autoridad que en observancia, con la visita eclesiástica y actos de visita, que no solo corrigen faltas ó abusos de actualidad; sino que los previenen para en adelante; con los sínodos diocesanos, en fin, son ciertamente la base del buen régimen de cada diócesis. De ahí, no ya la conveniencia, sino aun el deber de solicitud episcopal en que, siendo posible, como lo es, no haya una sola diócesis sin las convenientes constituciones sinodales, doblemente, cuando con tal eficacia lo inculca el Concilio de Trento: cuando cada dia el estado de las creencias lo exige con mas urgente necesidad, y cuando los sínodos, ó concilios sinodales, son los que menos dificultad ofrecen en su celebracion. Grande es, sin duda, no solo la falta absoluta de constituciones en una diócesis; sino aun su reforma y mejoramiento, segun la exigencia de los tiempos.

Hay diócesis, cuyas constituciones merecen atencion, y son de todos conocidas. Entre ellas deben citarse, con justa preferencia, las del cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, formadas, sobre las importantes tambien, del cardenal Moscoso y Sandoval, en el concilio sinodal de dicha diócesis de 1682, y que corren impresas en un tomo, fólio menor, de 360 páginas. Véase **SINODO**.

CONSTITUIDO, CONSTITUYENTE (DERECHO). Distincion técnica, que espresa, en el segundo concepto el derecho público cardinal, que es base y norma de la ulterior legislacion, en cuyo caso se hallan la Constitucion política de un Estado, y las leyes, que se llaman constitucionales, por su origen: en el primer concepto, el conjunto de leyes y disposiciones que descansan en el derecho constituyente, y que se dicen constitucionales por ser conformes á él.

En los gobiernos absolutos el poder constituyente y el constituido es uno mismo, y las leyes se diferencian entonces, segun su objeto y fin, en fundamentales y secundarias: en los representativos, el poder constituyente y el simplemente legislativo son diversos. Para que un parlamento se diga constituyente y tenga esa facultad, es menester que haya

sido elegido con ella, ó en la forma que la Constitucion determine para ese caso: no siendo así, sus funciones son legislativas ordinarias, y se llama Parlamento ó Córtes legislativas. Un mismo parlamento puede disfrutar de los dos conceptos; pero sucesivamente, como muchas veces sucede, precediendo la correspondiente declaracion legislativa, de dejar de ser constituyente y pasar á ser legislativo, hecha por el mismo, como suele suceder siempre que se hace nueva Constitucion política.

El nombrar Córtes constituyentes, es un caso de soberanía nacional práctica: no pudiendo la Nacion constituirse por sí, á causa del inmenso embarazo, delega en un parlamento que la constituya, anunciándose así en la convocatoria. Por este orígen legislativo, en el rigor de los principios, un parlamento meramente legislativo, no puede válidamente establecer derecho constituyente. Podria solo en un caso, lo cual sucede alguna vez, y es cuando en la Constitucion precedente se hubiese establecido que el poder de las Córtes seria á un tiempo, y segun el caso, constituyente y legislativo, en lo que se vé, que siempre, para el poder constituyente de un parlamento ó asamblea legislativa, precede delegacion de la Nacion, pues así fué constituyente el parlamento que hizo la mencionada Constitucion.

CONSTITUTO POSESORIO. *Constitutum possessorium.* Algunos jurisconsultos modernos, que han tratado del derecho romano, emplean la frase *constitutum possessorium*, para significar la tradicion, ó posesion fingidas, que se verifican, cuando el que poseia, como dueño, una cosa, continúa poseyéndola á nombre de aquel, á quien la traspasó sin acto ninguno material de entrega ó posesion. Es una tradicion semejante á la de *brevi manu*; pero contrapuesta á ella, porque tiene lugar cuando el que posee á nombre de otro, adquiere el derecho de retener como suya la cosa, que estaba antes en su mano ó en su poder, como ajena. Por mas que la frase *constitutum possessorium*, no pueda considerarse como clásica, y que no la emplearon los jurisconsultos romanos, no puede negarse que es muy adecuada para representar la idea á que se aplica, y evitar circunloquios, de que habria que valerse en su defecto.

CONSUL. Version de la voz latina *cónsul*, y con la misma significacion radical. De etimología incierta, y ya ella produjese el verbo *consulo*, ya proviniese de él, significó desde su orígen *el que era consultado*, el que respondia á la consulta, el que tenia suficiencia y autoridad para dar consejo ó dictámen. Y como el que así puede inspirar á otros, y dirigirlos, inspira justamente la confianza de que tambien sabria dirigirse á sí mismo; de aquí el que, estinguidos los reyes en Roma, y sustituidos por dos magistrados populares, que cada año se renovaban, se les denominase *cónsules*. En este concepto, la denominacion no espresaba, ya solo, como al principio, y filológicamente, el que respondia á la consulta de otro, el que daba su parecer y consejo; eran, sobre el fundamento de esa cualidad de suficiencia y prudencia, magistrados políticos supremos, y no solo que gobernaban la república, con sujecion á las leyes, y á la autoridad del Senado, como luego del pueblo; sino con poder soberano y absoluto, alguna vez, y segun la inspiracion de su prudencia, como cuando, en momentos supremos de peligro, se les revestia de una autoridad sin límites, de la *dictadura*, reduciendo toda la legislacion á esta fórmula tremenda, y tan conocida, y por virtud de decreto del Senado: «*Cavcant consules ne quid respublica detrimenti capiat*»: como si dijera, *queda encomendado á los cónsules el salvar la república*.

Sabido es por la historia cuánto se quebrantó su autoridad con la institucion del Imperio, y que tal magistratura se conservó, mas como un recuerdo ya, que como una realidad; hasta que Justiniano la suprimió definitivamente.

Pero habia existido largos siglos: personificaba, á veces, todas las glorias de Roma, y siempre hasta el Imperio, ocupó un lugar prominente en la historia: su influjo trascendió, como no podia menos, aun al órden jurídico, dando nombre, hasta autonomástico, á muchas leyes: las leyes romanas, en fin, fue-

ron por largo tiempo las del mundo conocido; como la base y la inspiracion de las legislaciones europeas posteriores; y cuando, siglos despues, el comercio empezó á ser la inspiracion de los pueblos cultos y se pensó en crear agentes especiales, y aun magistrados que lo dirigiesen y protegiesen, se les dió en general, primero, y en casos especiales despues, el nombre de *cónsules*; si bien ya *cónsules de comercio*; aun cuando alguna vez tambien, se dió aquel nombre magistrados políticos, como en la revolucion francesa del siglo 18.

En el primer concepto la institucion se generalizó; participó de la movilidad de los tiempos y de sus necesidades, diversificándose su significacion; y son diversos los puntos de vista jurídicos, políticos y comerciales, bajo los cuales no puede menos de ser examinada por la ENCICLOPEDIA: á saber, cónsules de España en el estranjero: cónsules de España en Berbería y Levante: cónsules en Ultramar: cónsules estranjeros en España: consules, como tribunal y jueces de comercio: consulado de la mar. De todos dan razon los artículos subsiguientes, sin que sea tan precisa la transicion entre unas y otras clases, que no haya algo de comun entre todas y algun período indefinido comun.

Dícese *consulado* el territorio á que se estiende el encargo y autoridad del cónsul, el mismo cargo tambien, y á veces el propio domicilio del cónsul, dado á conocer por algun signo esterior, que sirva de gobierno á sus naturales: y dícese *consular* lo perteneciente ó relativo al cargo.

CONSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO. La legislacion consular y prácticas consulares recibidas, abarcan tantos siglos, y como es consiguiente, encierran tales vicisitudes, que no es posible simplificar su artículo, si no ha de quedar incompleto. Aumenta la dificultad el proceder sus vicisitudes, como su actualidad, del derecho civil de cada nacion y del internacional, toda vez que de lo que principalmente vamos á tratar, es de nuestros cónsules en el estranjero. Tomando, como no puede menos, en consideracion la historia, es preciso hablar de cuán diferente era el consulado en su orígen, del de los tiempos posteriores. En su orígen veremos nombrar cónsules para el propio territorio, y todos con jurisdiccion; lo cual, andando el tiempo, aun se veia en nuestras posesiones de Ultramar. Andando el tiempo tambien, se nombraron y nombran para el propio territorio; pero ceñidas sus funciones á la jurisdiccion comercial ó en concepto de jueces ó tribunales. Por todo ello hemos creido dar al presente artículo la siguiente forma.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. RESEÑA HISTÓRICA.
SEC. II. DISPOSICIONES DE DERECHO CIVIL.
SEC. III. LEGISLACION INTERNACIONAL.
SEC. IV. NOVISÍMA LEY ORGÁNICA.

SECCION I.

RESEÑA HISTÓRICA.

En el siglo XIII se conocia ya en Europa esta institucion consular, y consta que las cruzadas la llevaron á Palestina. En el mismo siglo habia, así bien, Ordenanzas, que obligaban á los navegantes á presentarse á sus cónsules en los puertos de arribada (*Coleccion Diplomática*, núm. 10).

Por especial privilegio de Jaime I de Aragon, en 1266, confirmado y ampliado poco despues, obtenian estos agentes comerciales su nombramiento del magistrado municipal de Barcelona, el cual los autorizaba para gobernar, apremiar, castigar y oir en juicio, no solo á los catalanes y aragoneses; sino á todos los súbditos del Rey, que navegasen, ó residiesen en los paises, donde tenia Cataluña establecidas factorías ó casas de contratacion, ó donde hiciesen escala sus buques. Igual potestad les competia á los cónsules sobre las embarcaciones y efectos pertenecientes á los nacionales; y aquellos, á quienes no convenia permanecer mas de un año en Ultramar, estaban facultados para subdelegar en un teniente, por todo el tiempo que les faltase para cumplir el de su cargo, la especie de

jurisdiccion que ejercian. El magistrado municipal de Barcelona se reservaba pleno poder de castigar á su arbitrio á los cónsules y vice-cónsules, que faltasen á sus deberes; y antes de recibir su título, habian estos de jurar en el ayuntamiento el buen desempeño del cargo, en honor del Rey y beneficio público, afianzando con su persona y bienes su responsabilidad. La jurisdiccion y las prerogativas de estos cónsules son ya desconocidas en Europa.

En los primeros siglos del renacimiento del comercio, todas las naciones convinieron en la necesidad de tener cada una, en las escalas y puertos mercantiles de las demás respectivamente, á sus naturales reunidos, por decirlo así, en un cuerpo nacional, con barrio demarcado, lonja de contratacion y juzgado consular, segun sus leyes particulares, además del uso de pesos y medidas propias, y otras exenciones y fueros: y así se practicó, durante la Edad media, en las costas del Mediterráneo. Los tratados y alianzas recíprocas se observaban entónces con difícil exactitud: la diplomacia no habia aun perfeccionado sus formas, y los cónsules venian por consiguiente á llenar este vacío, representando en los países de su residencia los intereses de su nacion, amparando, defendiendo y juzgando á sus compatricios.

Se sabe que las ciudades marítimas del Mediterráneo fueron las creadoras de esta institucion consular; pero no hay noticias exactas sobre cuál de ellas fuese la primera en nombrar cónsules, si bien parece que este honor corresponde á Génova, cuyo gobierno, en 1267, publicó una ley, demarcando dos consulados generales, el de Ceuta y el de Tyro, al primero de los cuales debian subordinarse los de Andalucía, y al segundo los de Syria.

Posteriormente Narbona estableció en Pisa, en 1278, el primer cónsul ultramarino, con jurisdiccion civil y criminal; si bien consta que antes de esa fecha, en 1272, tenia Barcelona un cónsul en Egipto. Los consulados de Tunez y Bugía fueron pactados en 1281 por Conrado de Lanza, representante del Monarca aragonés, con el Rey tunecino.

En 1282 habia en Sevilla un cónsul de Barcelona: en 1285 lo tenia tambien en Sicilia, con residencia en Palermo, y poco despues otros en Mesina y Trápani, con facultades para nombrar vice-cónsules respectivamente, el cónsul de Palermo en Cefaledi, Termini y otras ciudades allende el Salso; el de Mesina en Pactas, Agosta, Heráclea, Melvi, Gaudisi, Catania, Melaso, Taormina y Syracusa; y el de Trápani en Mazara, Marzala, Sacco, Licata y Girgenti.

No mucho despues se establecieron consulados del reino de Aragon en Cerdeña, siendo los principales el de Cáller, en 1325, y los de Sácer, Alguer y Oristan: la fecha de cuya creacion no se conoce con exactitud. Casi de la misma época son los de Levante, pues en 1290 habia un cónsul en Constantinopla; si bien se ignora que estuviesen desempeñados los de Baruth, Damasco, Pera y Modon, antes de 1340, 1382, 1383 y 1437 respectivamente.

Tampoco hay noticias acerca de la fecha exacta en que fueron establecidos los consulados aragoneses en Francia, sabiéndose únicamente que estaban provistos, el de Mompeller en 1301, el de Marsella en 1434, el de Arlés en 1479, y el de Avignon en 1487.

Respecto á los de Italia, solo se sabe que existia en 1325 el de Génova, en 1333 el de Malta, en 1347 el de Chypre, en 1393 el de Saona y el de Pisa; y que, á mediados del siglo XIV, existian los de Marruecos, Málaga, Almería, Flandes, Toscana, Candia, Venecia y otros varios.

Todas las naciones, y ninguna con mas anterioridad y perseverancia que España, procuraron tener cónsules en los puertos y ciudades, donde los intereses mercantiles de sus súbditos los hacian necesarios; siendo de notar que la última en reconocer la importancia y conveniencia de esta institucion fué Inglaterra: cabalmente la nacion, que habia de conseguir mas que ninguna otra, mediante el desarrollo de su comercio esterior, grande influencia en todas las partes del mundo. Inglaterra fué la única que se negó por entonces á admitir cónsules, y la última en nombrarlos. Así vemos que sus primeros consulados en Pisa, Candía é islas de Scio da-

tan respectivamente de los años 1486, 1522 y 1531.

Fueron desde luego muy codiciados los cargos de cónsules, especialmente los de Aragon, por la utilidad no escasa, que reportaba el cargo, pues tal era la importancia que se le daba.

Segun escritores antiguos, la consignacion consular primitiva parece haber sido de un 3 por 100, ó un dinero por libra, en algunos consulados de Italia. En los del Imperio constantinopolitano, el 2 por 100, mitad para el Emperador y mitad para el cónsul. En Alejandría, 6 por 100, ó sean dos dineros á la entrada y otros dos á la salida de los géneros de comercio; aunque para proteger al tráfico, se modificó en 1437 esta tarifa, y en 1492 era el 1 por 100 lo que devengaba el cónsul, y el ½ por 100 solamente cuando los géneros consistian en monedas ó pastas de oro, plata ó platina. En Sicilia, segun las ordenanzas de 1341, percibian un grano y medio por cada onza del valor de los géneros que se importaban, y ¾ de grano, de los que se esportaban; ademas de cinco *tarines* por cada cubierta ó buque en todos los viajes, y un *carlino* por cada marinero. En el consulado de Damasco adeudaban los géneros y monedas, que se desembarcaban, 30 dineros por cada 500 libras, segun el reglamento de 1386. Finalmente, por los efectos y dinero que en buque nacional ó estranjero, procedentes de Rhodas, Romania, Turquía, Chypre y Sicília se conducian al puerto de Baruth, le correspondian al cónsul 20 dineros por cada 400 ducados, de 15 sueldos cada uno; y el cónsul de Rhodas no cobraba mas que 74 por 100, segun la manifestacion escrita, que en 1443 hicieron los jurados de Mallorca.

Así la institucion consular vino desarrollándose lentamente, y de un modo anormal, hasta los siglos XVI al XIX, en que, sucesivamente recibió mayor desarrollo, y sus formas actuales. Así por ejemplo, en un principio, era, de ordinario, inherente al consulado la jurisdiccion mercantil; cuando en los últimos siglos se ha erigido en axioma que los cónsules no son sino agentes comerciales de la nacion que los nombra, y cuya incumbencia única es la proteccion del comercio, y de ninguna manera la jurisdiccion, como volveremos á notar al hablar de los cónsules como jueces de comercio.

En cuanto á la lentitud en el desarrollo, tenia que ser así: lo uno, por que tambien se desarrollaba con lentitud y sumas dificultades la industria, y por tanto el comercio; lo otro, por que no habia llegado su época y pleno desarrollo, á otra institucion, que habia de prestarle, y le presta, vigor y vida; no tanto por lo que ella es en sí; sino por lo que significa, que es el desarrollo de relaciones políticas entre los estados, y el respeto al derecho de gentes, y por tanto el vigor de sus dogmas, en lo social y político. Esta otra institucion era la *diplomacia*: la diplomacia que interviene en conservar la paz de las naciones, y en terminar, y á veces precaver, las contiendas de las mismas, por medio de tratados de *paz*, de *amistad* y de *comercio*, siendo muy raro el que en alguno de ellos deje de estipularse sobre *agentes diplomáticos* y *consulares*.

De aquí el que cualquiera que haya sido el desarrollo lento y gradual de la institucion consular, no haya llegado al de mayor estension y normalidad en que se encuentra, hasta la época de los tratados, hasta los siglos XVII al XIX. Por ello puede inferirse, como así es, que la institucion consular, con sus leyes y formas, no ha de buscarse solo en nuestros códigos, en los que únicamente se hallará alguna ley, aunque importante; sino en las colecciones de tratados, y en disposiciones posteriores á la Recopilacion; sirviendo al primer propósito la estensa coleccion de tratados de Abreu, la sucesiva de Cantillo, y los tratados posteriores á ella, aun no coleccionados, así como las multiplicadas declaraciones y arreglos consulares de España y de otras naciones, de los que haremos mencion, siendo muy de notar, como en ellas se ve, en razon de lo que llevamos dicho, la fecha de todos, posterior al siglo XVI.

Así publicaron ya reglamentos consulares, la Francia en 1669, Dinamarca en 1749, y Prusia en 1796: y la instruccion para los cónsules venecianos, que se halla en el *Codice*

della Veneta mercantile marina, y la de los holandeses en *Groot Placaet boek*.

No debe perderse nunca de vista, que no siendo, en general, las teorías y legislacion consular, solo de derecho civil; sino principalmente de derecho internacional, ya particular, ya general, segun va espresado, domina en ellas el principio diplomático de la *reciprocidad*; y aun en los reglamentos generales de otras naciones, resultan principios aplicables á las demás. La razon es, porque, no dependiendo las funciones y atribuciones de cada cónsul de sola la nacion que le espide la patente; sino tambien de la que da el *exequatur*; esta no aprobará lo que no estime conducente en su país, ni en su caso podrá exigir otras reglas y principios para sus cónsules en aquella nacion que los que la misma tenga establecidos para los que de esta procedan.

De aquí nace el que en la institucion consular dominen reglas y principios generales, aun respecto de las naciones, que no los hayan estipulado, y á los cuales en todo caso se sujetan las estipulaciones, y los arreglos anuales particulares, como si tales principios fueran, como lo son en realidad, de derecho de gentes positivo. Tales son, el ya enunciado de que los cónsules, en general, y por tanto, ni los de España en el estranjero, ni los del estranjero en España, son otra cosa que meros agentes particulares de su nacion, para fomentar y auxiliar en la otra el comercio entre sus naturales: que no siendo ministros públicos, sus casas no gozan del derecho de asilo, ni de *exterritorialidad*, para impedir la visita, y reconocimiento en su caso, de las autoridades locales: y que no tienen, ni ejercen jurisdiccion, salvo en caso muy escepcional, como sucede respecto de los cónsules de España en Berbería y puntos de Levante, segun esponemos en artículo particular.

Réstanos ahora recorrer algunas disposiciones y arreglos consulares de España, en que se viene confirmando lo hasta aquí espuesto, como tambien lo que se halla establecido sobre nombramiento, categorías, y otros pormenores que completan la carrera consular.

SECCION II.

DISPOSICIONES DE DERECHO CIVIL.

Se deja bien entender que antes de nombrar cónsul, ha de haber consulado, pedido por la nacion, que ha de nombrar, y concedido su establecimiento por la que ha de recibir, en tratados, ó convenios particulares.

El cónsul nombrado para él, se presentará con *patente* del Soberano, ó Gobierno que lo envia, á la que ha de dar ó conceder el *exequatur* el Soberano que recibe. El *exequatur* se presenta á las autoridades del consulado, y dado el cumplimiento, el cónsul queda en funciones, principio que veremos desarrollado en las secciones ulteriores.

Nombramiento de cónsules. Segun el reglamento de 20 de Julio de 1848, sobre nombramiento y habilitacion de cónsules españoles en países estranjeros, para establecer un consulado de nueva creacion, hay en efecto que instruir el oportuno espediente, en el cual resulten demostradas su utilidad y necesidad; y en la misma forma se han de acreditar las ventajas de la modificacion de los consulados, cuando se trate de alterar su categoría (art. 1.° y 2.°). Los cónsules nombrados por S. M. deben obtener *patente Real* (art. 4.°), que se comunicará á los interesados (art. 7.°) por una Real órden, segun la clase y los méritos y servicios de cada cual, espresándose en ella el sueldo y los gastos que le fuesen señalados; de cuya Real órden (art. 8.°) se trasmitirá una copia á la pagaduría del ministerio de Estado para los fines consiguientes, previniéndose á la legacion á que corresponda, que solicite el Real *exequatur* para el cónsul nombrado por el Gobierno.

En 28 de Noviembre de 1851 se espidió sobre esta materia un Real decreto, para cuya ejecucion se adoptaron, en 2 de Diciembre del mismo año, varias disposiciones, que se refieren á las formalidades, que deben cumplirse en los Reales despachos, á las diligencias de toma de posesion de los consulados, y al *cese* en los mismos.

Categorías. De ordinario los cónsules son de primera y segunda clase, los que en su caso pueden nombrar vice-cónsules, ó agentes consulares, establecidos en puntos convenientes, los cuales, auxiliando sus tareas, bajo su direccion é instrucciones, les facilitan el cumplimiento de sus cargos. Hay tambien cónsules generales: tienen estos sus consulado particular, y además ejercen vigilancia y autoridad directiva sobre el cuerpo consular de su nacion. Suelen estar establecidos en las capitales, y de ordinario, por tanto, cerca de la legacion de su país, lo cual facilita mayor direccion y apoyo al servicio consular. La novedad inducida recientemente sobre la clase y servicio consular, y de que hemos de hablar mas adelante, hace que no descendamos aquí á otros pormenores.

Deberes y atribuciones. Queda indicada su obligacion principal de fomentar, en cuanto de ellos dependa, los intereses comerciales de su nacion; aconsejar, dirigir, instruir, y conciliar á sus naturales, dedicados al tráfico; y deben dispensar auxilios á todo español, que lo reclame (circular de 24 de Febrero de 1846), sean cuales fuesen las razones políticas, que determinen su permanencia en país estranjero; escepto en los casos de espedicion de pasaporte y demás que tengan relacion con la política, en los cuales deben atenerse á las instrucciones que les comunique el Gobierno.

Para ocurrir á estas atenciones, y llevar la debida cuenta y razon, han de observar la instruccion de 19 de Julio de 1836, que consta de setenta y dos artículos, y se halla dividida en cinco capítulos: habla en el 1.°, de los gastos que deben suplirse en las causas instruidas por la jurisdiccion consular, de las subvenciones á los procesados por la misma, y las que puedan ocasionar la estradicion de desertores y delincuentes y el destierro de vagos y mendigos: en el 2.°, de los auxilios, que han de prestarse á los empleados en el servicio nacional y por otras atenciones del mismo: en el 3.°, de los socorros á los matriculados en la marina mercante: en el 4.°, de los auxilios pecuniarios á los españoles, sin distincion de clase ni fuero: y en el 5.°, se prescriben disposiciones para el suministro de los gastos y socorros en general, y reintegro de los que suplan los cónsules de su peculio. El art. 64 de dicha instruccion fué reformado por Real órden circular de 20 de Julio de 1857.

Como ya queda indicado, tienen los cónsules facultad para nombrar delegados y comisionados, ya con estos nombres, ya con los mas usuales de vice-cónsules, y de agentes, para el mejor y mas pronto despacho de los negocios, puestos á su cuidado.

Pueden admitir poderes y encargos (circular de 28 de Febrero de 1852) para percibir, administrar ó negociar intereses particulares, como delegados ó representantes suyos, con tal que los interesados soliciten y obtengan préviamente el consentimiento del Gobierno, el cual lo concede en casos muy justificados de necesidad ó conveniencia. Pero habiendo ocurrido algunas dudas en esta materia, hubo necesidad de aclarar dicha Real órden, y se dispuso (circular de 30 de Agosto de 1852), que de ningun modo se comprendan en ella las gestiones, que deban y puedan los cónsules practicar, por su posicion y carácter, en favor de las pretensiones justas de los españoles, que reclamen su asistencia; limitándose dicha disposicion á prohibirles que admitan, sin espresa autorizacion del Gobierno, poderes ó encargos, para tratar, como particulares, negocios de otros, que los constituyan personal y civilmente responsables.

Pueden, y en caso necesario deben, sostener correspondencia directa con las autoridades españolas; si bien, por circular de 29 de Mayo de 1844, se dispuso, que bajo ningun título, ni pretesto se esprese en los despachos ú otro cualquiera documento oficial, el *nombre* del ministro ó funcionario á quien escriban; sino que pura y simplemente se dirija el membrete y sobre al empleo que cada uno ejerza, para evitar de este modo que se confunda la correspondencia particular con la de oficio.

Les está prohibido tambien (circular de 17 de Mayo de 1851) incluir en los pliegos de la correspondencia oficial, que dirigen al Ministerio de Estado por el correo ordinario, mas

que los oficios para las autoridades, y las cartas sencillas que les sean propias y vayan destinadas á sus familias ó á los empleados de dicho Ministerio. Habiendo llegado á ser notable el abuso que se cometia presentando á S. M. desde el estranjero libros y cuadernos literarios y de música, aumentándose el porte de la correspondencia de una manera escesivamente gravosa, se ordenó (circular de 19 de Diciembre de 1851), que no admitiesen, segun su prudencia, mas obras que aquellas cuyo sobresaliente mérito las hiciera dignas de llegar á la augusta persona, á quien se destinaban. Y por otra Real órden (12 de Enero de 1852), se establecieron varias reglas sobre el tamaño, forma y calidad del papel que los cónsules han de emplear en sus comunicaciones.

Se halla dispuesto asimismo (circular de 7 de Octubre de 1852), que ninguna autoridad ni corporacion pudiera entenderse directamente con los agentes de S. M. en el estranjero; sino por conducto de la primera secretaría de Estado. Pero, habiendo ocurrido algunas dudas sobre su inteligencia, hubo necesidad de aclararla por otra Real órden (15 de Enero de 1853), determinándose que las autoridades de las provincias y los agentes de S. M. en el estranjero, se entiendan entre sí directamente, siempre que lo exijan el interés y la urgencia del servicio, y en aquellos casos, en que no esté espresamente dispuesto lo contrario por Reales órdenes: que cuando dichas autoridades crean deber dirigirse al Ministerio de Estado, lo verifiquen siempre por conducto del suyo respectivo, y que continúen, como hasta entonces, la direccion de Aduanas y el Ministerio de Hacienda, entendiéndose directamente con los cónsules y vicecónsules, en cuanto se refiera á la documentacion consular, para garantizar el tráfico legal é impedir ocultaciones y fraudes.

En la misma época el Ministerio de la Gobernacion manifestó al de Estado la conveniencia de que las comunicaciones de los cónsules llevasen el sello oficial respectivo, y asi se dispuso (circular de 12 de Octubre de 1852), no obstante la práctica contraria, que se observaba. Por otra circular, aclaratoria de un caso especial (4 de Agosto de 1856), se mandó que siempre que los cónsules de España en cualquier punto del estranjero tuviesen que oficiar á alguna autoridad de marina española, dirijieran sus pliegos por el Ministerio de Estado.

Finalmente, es digno de recordarse que, habiéndose remitido á este Ministerio por algunas de las legaciones españolas, con el fin de que por su conducto llegasen á poder de los interesados, los autos de citacion, que los tribunales estranjeros espiden para individuos residentes en la Península, el Ministerio de Estado, teniendo en consideracion que, si bien al carácter de los Enviados de S. M. en el estranjero incumbe protejer los intereses de los súbditos españoles, no puede estenderse esta obligacion hasta convertirlos en agentes particulares, dispuso (circular de 29 de Mayo de 1845), que los cónsules no admitan, ni den curso á esta clase de documentos; y al mismo tiempo se previno al Ministerio de Gracia y Justicia, que, por medio de los tribunales y Audiencias del Reino, hiciese saber á las personas, que tuvieran asuntos judiciales pendientes ante tribunales estranjeros, que cuidaran de nombrar en el país, donde aquellos se ventilasen, el correspondiente apoderado, que se encargara de remitirles los autos por la vía ordinaria.

Deben llevar los cónsules los correspondientes libros de registro, y *abrirlos*, espresando á la cabeza el dia en que lo hacen, foliando y rubricando sus hojas, y espresando el número de las útiles que contiene cada uno, certificándolos, firmándolos y sellándolos. Asimismo, cuando los *cierren*, deben anotar en ellos el dia, en que lo hacen, y la hoja en que terminan, firmándolo y sellándolo igualmente con el sello del consulado.

Los *registros* mencionados son los siguientes: de matrícula de súbditos españoles, de los súbditos españoles presentados ó transeuntes; de pasaportes, espedidos por el consulado; de refrendacion de pasaportes espedidos por autoridades españolas; de id. id. por las estranjeras; de entradas y salidas de buques españoles; de arribadas de los mis-

mos; de espedicion ó certificacion de patentes de sanidad para buques españoles; de idem id. para estranjeros; de permisos de embarque á marineros y otros indivíduos españoles de la tripulacion de los buques; de legalizacion de firmas de autoridades y de particulares; del cargamento de buques españoles, entrados en el puerto donde resida el cónsul, procedentes de España, Ultramar y paises estranjeros, y salidos del mismo con destino á la Península; de id. á las provincias españolas de Ultramar. Además, dos de correspondencia, uno de oficios y cartas particulares recibidos, y otro de los escritos por el consulado: de decretos y Reales órdenes recibidas en el mismo: de correspondencia con el ministerio de Estado: de la correspondencia consular con las autoridades españolas y las estranjeras: de depósitos en el consulado: de exhortos dirigidos al mismo: de actas notariales y certificados: de recaudacion diaria: de ingresos trimestrales de los fondos remitidos por los vice-cónsules y agentes consulares de la dependencia del consulado: de gastos ordinarios de cancillería, y de estraordinarios á cargo del Ministerio de Estado; y de inventario de muebles y efectos del despacho y cancillería consular, y del archivo del consulado. Estos dos últimos *registros*, ó sean los relativos á recaudacion é inversion de fondos y á inventarios, deben llevar la firma del canciller ó archivero y el V.° B.° ó conformidad del cónsul.

Asimismo deben llevar varios estados sobre asuntos y materias, interesantísimos, segun está prevenido en multitud de Reales órdenes y disposiciones de los Ministerios de Estado, Hacienda, Gobernacion, Fomento, Marina y Ultramar, de las cuales, sin embargo, no haremos sino las indicaciones indispensables.

Cada quince dias tienen los cónsules obligacion de remitir al Ministerio de Estado (circular de 1.° de Enero de 1849) notas de los precios corrientes, que en los mercados estranjeros alcanzan los principales artículos de comercio, ajustándolas al modelo prevenido, procurando en ellas la conveniente conformidad, y comprendiendo todas las noticias necesarias para adquirir un completo conocimiento en la materia.

Además de los *estados de navegacion y comercio*, que les está prevenido remitir cada trimestre, deben enviar al fin de cada año (id. de 2 de Enero de id.) un resúmen general de aquellos, con separacion de los buques españoles y estranjeros, con arreglo á modelos especiales; debiendo acompañar á este trabajo una razonada y clara esposicion del movimiento mercantil de España y sus colonias con los puertos de cada distrito consular, durante el año; comparando en ella sus resultados con los anteriores; manifestando las causas de su aumento ó disminucion, y haciendo cuantas observaciones puedan contribuir, en su concepto, á la mejora y fomento de la agricultura, industria, comercio y navegacion nacionales.

Respecto á la salud pública, espedicion de patentes de sanidad, cumplimiento de las leyes sanitarias y de policía, y cuanto á esta materia se refiere, los estados y noticias necesarias (instruc. de 17 de Octubre de 1850).

Segun circular de 3 de Enero de 1857, darán partes oportunos: 1.° de toda invencion, mejora ó descubrimiento, que pueda ser útil á la industria española: 2.° de las descripciones y noticias sobre islas ó bajos, nuevamente descubiertos, ó error de su situacion, establecimiento ó supresion de faros, límites, barras ó valizas, y todos los cambios importantes, que ocurran en el litoral de su demarcacion consular, acompañando los planos, avisos y demás documentos hidrográficos, que se publiquen: 3.° de las enfermedades epidémicas, que aparezcan en cada distrito consular ó en sus inmediaciones, de las medidas adoptadas para prevenir el contagio ó disminuir su progreso, y de las alteraciones que esperimenten en todos tiempos los reglamentos sanitarios de los puertos respectivos: 4.° de los bloqueos, embargos, alteraciones de derechos de puerto ó de aduanas, prohibicion de géneros ó admision de los prohibidos, y de cualquiera otra alteracion, que pueda interesar á la navegacion y comercio de España.

En Real órden de 15 de Noviembre de 1860 se recordó á los agentes consulares el puntual cumplimiento de las reglas precedentes

sobre navegacion y estadística mercantil: y para simplificar la prolija tarea, y evitar el envío de documentos voluminosos, en cuanto por ello no se perjudique el servicio público, se introdujeron las siguientes modificaciones: 1.° Los estados de precios corrientes se remitirán todos los meses, enviando dos ejemplares: uno en derechura á la direccion general de Aduanas y Aranceles, y otro al Ministerio de Estado, ambos bajo faja y sin oficio de remision. 2.° Los precios corrientes de los cereales y de los demás artículos de primera necesidad, se seguirán remitiendo por quincenas, segun lo prevenido en la Real órden de 14 de Agosto de 1856; pero no se enviará mas que un ejemplar, con sobre ó faja al Ministerio que corresponda, para que en todo tiempo puedan hacerse constar las obligaciones á que los mismos se refieran.

Se halla ordenado, asi bien, que los documentos públicos, referentes á contratos, obligaciones de cualquier clase, otorgamiento de poderes, testamentos etc., autorizados por los cónsules, en su carácter de depositarios de la fé pública, entre españoles residentes en sus respectivas demarcaciones, se redacten y estiendan con arreglo á las formas prescritas para el notariado del reino (circular de 28 de Octubre de 1860). Dichos documentos se protocolizarán, llevándose al intento un libro de papel consistente, foliado, con rúbrica del cónsul ó vice-cónsul al pié de cada una de las hojas escritas, estendiéndose á continuacion del último documento, que en fin de cada año se protocolice en esta forma, una certificacion, en que aparezcan consignados el número de hojas utilizadas en el libro y el total de instrumentos públicos del mismo, con la oportuna advertencia sobre la validez de cualquiera raspadura ó entrerenglonado que contengan. Al final del libro debe ponerse un índice, espresivo del objeto sobre que verse cada uno de los instrumentos públicos, en él contenidos. Este libro podrá servir para uno ó mas años, pero sin omitirse las formalidades prevenidas; habiendo que remitir anualmente al Ministerio de Estado una copia exacta del índice, con las observaciones que se juzguen necesarias.

En vista de una consulta elevada al mismo Ministerio sobre la espedicion de los que se llamaban *certificados de ley*, que venian á ser declaraciones de lo dispuesto por las leyes en ciertos casos, y sobre determinados puntos de derecho, se resolvió (circular de 14 de Noviembre de 1862) que se abstuviesen los cónsules de estender dichas *declaraciones de ley* ó derecho, teniendo en cuenta, que los agentes consulares no están llamados á desempeñar funciones propias de jurisconsultos, y que podia ocasionar compromisos la práctica, que en este particular se seguia en algunos consulados, de facilitar esos documentos, que venian á ser una especie de sentencias anticipadas ó prejudiciales sobre asuntos contenciosos.

Sueldos, obvenciones y gastos. Tienen los cónsules la obligacion de esponer al público en sus oficinas las tarifas de los derechos de consulado y cancillería, y de anotar al pié de los documentos, que espidan ó autoricen, los derechos que perciban con arreglo á las mismas. (Circular de 15 Junio de 1857. Véase además la tarifa de 23 de Agosto de 1778: la instruccion de 19 de Julio de 1856: y por lo que hace á los cónsules en Francia, la tarifa de 1857.)

No hay que decir que, en lo general y en su principio, la retribucion de los cónsules eran las obvenciones de tarifa. Despues hubo consulados, que siendo indispensables, no mantenian al cónsul, sin embargo, y fué necesario asignar alguna retribucion. Estendido el comercio y las relaciones sociales, se notó que habia consulados, que rendian tan considerables emolumentos, que escedian á una justa retribucion; y se adoptó el medio, puestas en claro las obvenciones, de designar al cónsul, á cargo de ellas, una retribucion adecuada, cediendo el resto en favor del Estado, para lo que se rectificaron y ordenaron las tarifas. Eran ya muchos los consulados, que se hallaban en este caso, y muy considerable el rendimiento en favor del Estado, figurando últimamente, como uno de los ingresos en los respectivos presupuestos generales, como puede verse, muy señaladamente en los del Ministerio de Estado, de 1866 y 1867: todo lo cual

ha sido en gran parte variado por la nueva ley y reglamentos orgánicos consulares, segun verán nuestros lectores en la 4.ª seccion. Véase al caso la tarifa de derechos y obvenciones de los consulados, aprobada por Real decreto de 23 de Abril de 1867.

Honores y condecoraciones. Segun Real órden de 10 de Agosto de 1853, la categoría de cónsul general equivale á la de brigadier de la armada; la de cónsul de primera clase, á la de capitan de navío; y la de cónsul de segunda clase á la de capitan de fragata. Conforme á la *nota*, circulada con la misma Real órden por el Ministerio de Marina, les corresponden respectivamente:

Al cónsul general, los honores militares, que previene el art. 16, tít. 3.º, tratado 4.º de las Ordenanzas; los saludos, que al empleo de brigadier marca el art. 9.º, tít. 2.º, id., y la insignia en bote, que al mismo señala el artículo 31, tít. 1.º, id., á saber, una voz, nueve cañonazos, la tropa en ala y la bandera á popa.

Al cónsul de primera clase, los mismos honores; pero no más de siete cañonazos.

Al cónsul de segunda clase, dos cañonazos ménos.

Con esta cuestion se liga la, no poco debatida en los últimos tiempos, del carácter político del cargo consular. ¿Continúa siendo, en todo caso y sin distincion, fuera del escepcional concepto jurisdiccional, que tratamos en sus artículos respectivos, el de meros agentes comerciales; ó alguna vez revisten carácter diplomático? En principio, el primer estremo es la solucion adecuada. Sin embargo, por las legislaciones civiles, los cónsules, para que en ningun caso se confundieran el carácter *consular* y el *diplomático*, no podian señalar sus moradas con el pabellon nacional, ni escudo de armas de su nacion, y sí, cuando más, con un signo convencional cualquiera, y el anuncio escrito, «*Consulado de.....*:» hoy, por la legislacion de tratados, por derecho internacional, pueden izar el pabellon de su país, y fijar sobre sus puertas el escudo de las armas de su nacion; salvo que residan en el mismo punto que la legacion de aquella. No es esto todavía todo: aun no gozan sus domicilios del derecho de asilo, y escepcion de visitas domiciliarias de las autoridades locales. Si alguna vez, en circunstancias estraordinarias y para caso dado, reciben encargo y autoridad que esceda de la comercial, cerca del Gobierno, ó autoridad del país, entonces ha de suponerse que revisten el carácter de *agentes estraordinarios*. Véase aun la seccion IV.

SECCION III.

LEGISLACION INTERNACIONAL.

La legislacion de derecho internacional general sobre consulados, se refleja en el internacional particular, ó de una nacion con otra, por la razon fundamental, y ya insinuada, de que, en asunto de tal naturaleza ninguna nacion pide lo que no puede conceder á su vez, ni á la inversa. Así, la identidad, en principio, de la causa que produce la necesidad y prácticas recibidas sobre agentes consulares, esto es, los intereses comerciales: la cláusula, que ordinariamente acompaña en los tratados de comercio y convenciones consulares, de haber de gozar cada una de las partes de las ventajas y preeminencias *de la nacion más favorecida*, con lo cual sucede, en el resultado, que cada nacion estipula en cierto modo para las demás: la práctica universal, en fin, de que, aunque sobrevenga guerra entre las naciones, que tenian tratados, y puesto que la guerra destruye la eficacia de éstos, subsistan luego, sin embargo, sin nuevas estipulaciones, las prácticas consulares, como universales, y de derecho internacional universal, cual sucedió entre España é Inglaterra, entre España y Portugal, entre España y Francia, despues de sus guerras conocidas; este conjunto de causas produce una regla práctica y general de aplicacion.

Esta regla es que, no obstante que el agente consular en país estranjero responde á un doble deber, el que le imponen *el exequatur*, y las leyes y prácticas del país que le recibe, y el que le prescribe el Gobierno que le envia; de estas no se prescinde, ya en la patente, ya en instrucciones generales ó especiales: de aquellas suele prescindirse, y se

entienden impuestas por las prácticas recibidas.

Otras veces se invoca, como regla, la reciprocidad y práctica general, como, por ejemplo, en el tratado de comercio y amistad entre España é Inglaterra, de 9 de Diciembre de 1813, en el Congreso de Utrech. «El cónsul, dice, que de aquí adelante residiere en los dominios del Rey de España para el auxilio y proteccion de los súbditos del Rey de la Gran Bretaña..... ejercerá la misma potestad y autoridad para el cumplimiento de su empleo, *que haya tenido hasta aquí cualquier otro cónsul* en los dominios del Rey Católico; y *recíprocamente* los cónsules de España, residentes en Inglaterra, *gozarán de la misma autoridad que hasta aquí se ha permitido en dicho Reino á los cónsules de cualquier otra nacion.*» (Art. 27.)

Eso no obstante, todavía las naciones ajustan con frecuencia especiales convenios consulares y de derechos civiles de los propios súbditos, como los que, en cuanto á España, reseñamos á continuacion; todos notables por cierto en su contesto y pormenores.

Portugal. Tal es el de 26 de Junio de 1845, entre esta nacion y España, sobre otras, por una circunstancia, que mencionamos al final, relativa al uso del escudo de armas nacionales.

Segun este convenio, las dos naciones pueden nombrar cónsul general, cónsules y vicecónsules en los puertos, plazas de comercio y lugares principales de la otra, pudiendo cada una, sin embargo, rehusarlos en algun punto determinado. Dichos funcionarios, presentando la patente con el *exequatur*, y cumplimentado éste por las autoridades locales, podrán ejercer sus funciones en el punto de su cargo, y las autoridades les dispensarán su proteccion (art. 1.°).

Sus naturales pueden nombrarlos árbitros en sus litigios y diferencias, y el laudo será válido, siendo confirmado por la autoridad local, sin perjuicio además de recurrir á los tribunales del país.

Decidirán, sin intervencion de las autoridades locales, las cuestiones entre el capitan de un buque de su nacion y sus marineros y tripulantes, sobre soldadas, en el caso de revocacion del viaje, falta de sustento, mal trato, y causas de igual urgencia. Las autoridades locales, sin embargo, deberán intervenir, si tales contiendas afectan á la tranquilidad del país y al respeto á las leyes: en ello dispensarán proteccion á los agentes consulares, salvo siempre el recurso de los que se crean perjudicados, para ante las autoridades de su país. «Los agentes consulares de uno y otro país deberán proceder al inventario, liquidacion, particion y entrega de los bienes de los súbditos respectivos, que fallezcan, con testamento, ó *ab-intestato*, en el distrito de su cargo» (art. 2.°).

Para mayor garantía de los derechos del fisco, y de los súbditos del país, ó de otra nacion, que puedan hallarse interesados en la herencia, los actos de testamentaría, desde la imposicion de los sellos, hasta la entrega de la herencia, se verificarán con autoridad y en presencia del juez del distrito, que los autorizara con informe. Durante la operacion, los bienes serán depositados en un banco, ó en una persona de garantía, por el agente consular, con autoridad del juez (art. 3.°).

Unos y otros agentes consulares gozarán de la fé pública, necesaria para el desempeño de su cargo. Las tarifas consulares, como su modificacion, serán comunicadas por una nacion á la otra (art. 4.°).

Unos y otros podrán pasar á bordo de los buques de su nacion, luego que estos hayan sido admitidos á libre plática: y asimismo, cuando los reglamentos de aduanas y de justicia lo permitan, acompañar á los ministros de justicia y oficiales de aduanas, al trasladarse á dichos buques, para practicar alguna averiguacion ó diligencia: y acompañar, en fin, al capitan é individuos de la tripulacion, cuando tengan que comparecer ante las autoridades, con abogado y procurador (artículo 5.°).

Podrán exigir á los capitanes de buques de su bandera manifiestos jurados de la carga, de entrada y de salida: y á los de la otra nacion, de la carga de salida, cuando el buque lleve destino á la nacion de los mismos. Las autoridades de puerto no consentirán que sal-

gan los capitanes de buque sin el pasaporte correspondiente, visado por su cónsul (artículo 6.°)

En casos de naufragio de un buque español en Portugal, y viceversa, deberá la autoridad administrativa competente, providenciar sin demora cuanto juzgue necesario para el salvamento, teniendo cuidado de prevenir desde luego al respectivo agente consular, con cuyo acuerdo y conformidad habrán de adoptarse todas las medidas, así para el salvamento, como para el inventario y depósito de los efectos salvados, las cuales deberán ponerse en práctica, bajo la direccion esclusiva de dicha autoridad administrativa. A falta de capitan ó del consignatario del buque, ó por imposibilidad de aquel, satisfará el agente consular los gastos, que el salvamento haya ocasionado; los cuales serán reintegrados, vendiéndose á pública subasta la parte de los efectos salvados, que baste á cubrir el desembolso. Dichos gastos no escederán de los que pague en igual caso un buque nacional; y las mercancías y géneros salvados del naufragio, no quedarán sujetos al pago de derechos, sino en el caso de ser despachados para consumo. Satisfechos los gastos de salvamento, ó prestando fianza suficiente el capitan, el dueño ó el consignatario del buque ó el agente consular, deberán entregárseles los efectos salvados, luego que sean reclamados (artículo 7.°).

Pueden pedir á las autoridades locales el arresto y encarcelamiento de los desertores de los buques de guerra, ó mercantes, de su nacion. La peticion será por escrito, exhibiendo las matrículas de los buques, los *roles* de la tripulacion, ú otros documentos oficiales, y la procedencia del desertor, en cuya consecuencia les serán entregados. Cuando los desertores hayan sido arrestados, podrán ser entregados á los cónsules, á costa del que lo reclame, para su vuelta al buque de que procedan, ú otro de la misma nacion. Si no fuesen recibidos en término de dos meses, por el hecho quedarán en libertad y no podrán volver á ser reclamados, ni detenidos por la misma causa. Si entre tanto hubiesen cometido algun delito contra las leyes del país, serán detenidos, á disposicion del tribunal competente, hasta que recaiga sentencia.

Pueden, por último, reclamar la entrega de los mozos, sujetos á quintas en su país, y que se hubieren fugado del mismo, y acogídose en el otro; y presentando el cónsul el exhorto fehaciente, le serán entregados (art. 8.°).

Pueden dirigir á las autoridades locales las reclamaciones, que crean justas en favor de los súbditos nacionales, y de sus intereses comerciales (art. 9.°).

Si son súbditos del Estado que los nombre, gozan de inmunidad de prision, salvo por delito, que, segun las leyes del país, en que residen, tenga señalada pena de muerte ó aflictiva. Si son súbditos del país que los recibe, y si, aun no siéndolo, ejercen el comercio, estarán en el primer caso sujetos á todas las cargas que los naturales; y en el segundo, á las relativas comerciales. Llevarán con separacion en este caso los libros y documentos de los consulados. El archivo consular será inviolable (art. 10).

Si su conducta así lo requiere, podrá el gobierno retirarles el *exequatur*, dando cuenta á su Gobierno respectivo; y si continúan residiendo en el país, será cesando todas las prerogativas consulares (art. 11).

Para prestar una declaracion jurídica, se les pasará atento aviso, y no podrán dejar de concurrir al tribunal. Lo mismo en otros actos judiciales, en que su asistencia se estime necesaria, en cuyo caso se les dará asiento dentro de la baranda del tribunal (art. 12).

Indicamos al principio que en este convenio era de notar una circunstancia, relativa al distintivo de la casa consular, y escudo de armas de su país. Hemos indicado tambien, cuánto habia sido el rigor prohibitivo en esta parte, atentos los Estados á que no se confundiesen el carácter consular y el diplomático. Se comprendia que no podia ostentarse el escudo de las armas del respectivo país, sin que llevase consigo el derecho de *asilo*, é inmunidad de visitas domiciliarias de ninguna autoridad. Nuestras leyes recopiladas eran en esto terminantes. «Que sus casas no gozan de inmunidad alguna; ni puedan tener en parte pública la insignia de las armas del Príncipe

ó Estado, que los nombre; y que solo puedan en sus torres ó azoteas, ó en otros parages de sus casas, poner señal, que manifieste á los de su nacion cuál es la casa del cónsul.....» (Ley 6, tít. 11, lib. 6, Nov.)

Pero en la práctica general empezó á templarse este rigor, y no habia en ello dificultad, salvando la cuestion de principio; otras veces declarando y entendiéndose que el escudo de armas, respecto de la casa consular, ni espresa *asilo*, ni inmunidad, en cuanto á las visitas domiciliarias de las autoridades. Ha llegado, pues, á ser general el uso del escudo de armas de su nacion, y asta bandera para izar el pabellon nacional respectivo en las solemnidades. Esta práctica empezó á introducirse en España, ajustando en el presente convenio, que «los agentes consulares podrán colocar *las armas de su nacion* dentro del portal de su casa, segun la práctica establecida en el país, en que residan; pero esta señal, *mera indicacion de su morada*, no supondrá *derecho de asilo*, ni sustraerá la casa, ó sus habitantes *á las pesquisas legales* de los magistrados del país» (art. 13.)

Al antedicho tratado, se siguió el de 21 de Febrero de 1870, mejorando en mucho la condicion de los súbditos respectivos. Es de doble carácter: de los derechos civiles de estos, y de los agentes consulares, respecto de los que reproduce las declaraciones de los tratados de su clase, y ordena además, que no se podrá negar el establecimiento de su consulado, en punto en que se haya concedido á otra nacion, lo cual es, variados los términos, la cláusula, ya actual y comun en los tratados, de *nacion mas favorecida* (art. 7.°)

«Art. 10. Los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules, no estarán obligados á comparecer, como testigos, ante los tribunales del país en que residan. Pero no podrán negar sus declaraciones, cuando la autoridad judicial se traslade á su domicilio para que las presten de viva voz, ó se las pida por escrito, ó delegue, para que las reciba, á un funcionario competente en Portugal ó á un notario público en España.

En cualesquiera de estos casos tendrán la obligacion de cumplir los deseos de la autoridad en el término, dia y hora que la misma señale, sin oponer dilaciones innecesarias.....

»Art. 12. Los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules, podrán colocar sobre la puerta esterior del consulado ó vice-consulado, el escudo de armas de su nacion, con esta inscripcion: *Consulado* ó *Vice-consulado de*.....

Podrán igualmente enarbolar la bandera da su país en la casa consular, durante los dias de solemnidades públicas, religiosas ó nacionales, así como en las ocasiones de costumbre; pero cesarán en el ejercicio de este doble privilegio, cuando los referidos agentes residan en la capital donde se halle la Embajada ó Legacion de su país.

Tendrán tambien facultad para levantar la bandera nacional respectiva en el bote que los conduzca por el puerto para desempeñar las funciones de su cometido.....

»Art. 14. En los casos de impedimento, ausencia ó muerte de los cónsules generales, cónsules ó vice-cónsules, los alumnos consulares, cancilleres ó secretarios, que préviamente hubiesen sido presentados como tales á las autoridades respectivas, serán admitidos de pleno derecho por su órden gerárquico á encargarse interinamente de las funciones consulares, sin que pueda ponérseles impedimento por parte de las autoridades locales. Por el contrario, deberán estas prestarles asistencia y proteccion, y hacerles guardar, durante la interinidad, todas las exenciones, prerogativas, inmunidades y privilegios estipulados en el presente convenio, á favor de los agentes consulares respectivos.....

»Art. 18. Los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules ó agentes consulares de los dos paises, ó sus cancilleres, tendrán el derecho de recibir en sus cancillerías, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques de su nacion, las declaraciones que hayan de prestar los capitanes, tripulantes y pasajeros negociantes, y cualesquiera otros súbditos de su país.

Asimismo estáran facultados para autorizar, como notarios, las disposiciones testamentarias de sus nacionales, y todos los demás actos propios de la jurisdiccion voluntaria, aun

cuando estos actos tengan por objeto la constitucion de hipotecas.

Los referidos agentes tendrán además el derecho de autorizar, en sus respectivas cancillerías, todos los contratos que envuelvan obligaciones personales entre uno ó mas de sus compatriotas y otras personas del país en que residan, así como tambien todos aquellos que, aun siendo de interés esclusivo para los naturales del mismo territorio en que se celebran, se refieran á bienes situados ó á negocios que deban tratarse en cualquier punto de la nacion á que pertenezca el cónsul ó vice-cónsul, ante el cual se formalicen dichos actos.

Los testimonios ó certificaciones de estos actos, debidamente legalizados por dichos agentes y sellados con el sello de oficio de sus consulados ó vice-consulados, harán fé en juicio y fuera de él, así en los Estados de España como de Portugal, y tendrán la misma fuerza y valor que si se hubiesen otorgado ante notario ú otros oficiales públicos del uno ó del otro país, con tal que estos actos se hayan estendido en la forma requerida por las leyes del Estado á que pertenezcan los cónsules ó vice-cónsules, y hayan sido despues sometidos al sello, registro ó cualesquiera otras formalidades que rijan en el país en que el acto deba ponerse en ejecucion.

Cuando se dude de la autenticidad de un documento público protocolizado en la cancillería de uno de los consulados respectivos, no deberá negarse su confrontacion con el original, mediando peticion de parte interesada, que podrá asistir al acto si lo estima conveniente.

Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules ó agentes consulares respectivos, podrán traducir y legalizar toda clase de documentos emanados de las autoridades ó funcionarios de su país, y estas traducciones tendrán en el de su residencia la misma fuerza y valor que si hubiesen sido hechas por los intérpretes jurados del territorio.

»Art. 19. En caso de fallecimiento de algun súbdito de una de las partes contratantes, en el territorio de la otra, las autoridades locales deberán avisar inmediatamente al cónsul general, cónsul, vice-cónsul ó agente consular, en cuyo distrito haya ocurrido el fallecimiento. Estos deberán por su parte dar el mismo aviso á las autoridades locales, cuando llegue antes á su noticia el fallecimiento.

Cuando un español en Portugal, ó un portugués en España, hubiese muerto sin hacer testamento ni designar ejecutor testamentario; ó si alguno de los herederos forzosos ó instituidos en testamento fuese menor, ó se hallase incapacitado ó ausente, ó si los ejecutores testamentarios nombrados no se hallaren en el punto, en que se incoe la testamentaría, en todos estos casos, los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules ó agentes consulares de la nacion del finado, deberán proceder sucesivamente á las siguientes operaciones:

1.° Poner los sellos, ó de oficio ó á peticion de las partes interesadas, sobre todos los efectos muebles y papeles del difunto, previniendo de esta operacion á la autoridad local competente, que podrá asistir y poner tambien sus sellos.

Estos sellos no podrán levantarse, como tampoco los del agente consular, sin la concurrencia de la autoridad local.

No obstante, si despues de un aviso dirigido por el cónsul ó vice-cónsul á la autoridad local invitándola á asistir al levantamiento de los sellos dobles, no compareciese esta dentro de un término de 48 horas, despues de recibido el aviso, el espresado agente podrá proceder por sí solo á dicha operacion.

2.° Formar el inventario de todos los bienes y efectos del difunto en presencia de la autoridad local, si hubiese concurrido al acto en virtud de la indicada notificacion.

La autoridad local autorizará con su firma las actuaciones que presencie, sin que por su intervencion de oficio en ellas se causen costas de ninguna especie.

3.° Disponer la venta, en pública subasta, de todos los efectos muebles de la testamentaría que pudiesen deteriorarse, y de los que sean de difícil conservacion, así como de los frutos y efectos, para cuya enajenacion se presenten circunstancias favorables.

4.° Constituir en depósito seguro los efec-

tos y valores inventariados, el importe de los créditos que se realicen y de los rendimientos que se recauden, bien sea en la casa consular, ó bien en la de algun comerciante de la confianza del cónsul ó vice-cónsul.

En ambos casos deberá procederse de acuerdo con la autoridad local, que haya intervenido en las operaciones anteriores, si despues de la convocatoria á que se refiere el párrafo siguiente, se presentasen súbditos del país ó de una tercera potencia, como interesados en el abintestato ó testamentaría.

5.ª Convocar por medio de los periódicos de la localidad y del país del finado, si necesario fuese, á los acreedores que pudiera haber contra el abintestato ó testamentaría, á fin de que hagan valer sus respectivos créditos, debidamente justificados, dentro del término legal en cada país.

Si se presentaren acreedores contra la testamentaría ó abintestato, habrá de hacerse el pago de sus créditos á los quince dias de terminado el inventario, si resultase haber numerario, en cantidad suficiente para ello; y en caso contrario, tan luego como puedan realizarse fondos por los medios mas convenientes, ó bien dentro del plazo que se determine por comun acuerdo entre el cónsul y la mayoría de los interesados.

Si el cónsul respectivo denegase el pago de uno ó mas de los créditos presentados, alegando la insuficiencia de los bienes de la testamentaría para satisfacerlos, los acreedores tendrán espedito su derecho para pedir á la autoridad competente, si lo consideran conveniente á sus intereses, que el abintestato ó testamentaría se declare en concurso necesario de acreedores.

Obtenida esta declaracion por los medios legales establecidos en cada una de las dos naciones respectivamente, los cónsules y vice-cónsules deberán hacer seguidamente entrega á la autoridad judicial ó á los síndicos del concurso, segun corresponda, de todos los documentos, efectos y valores pertenecientes á la testamentaría ó abintestato, y quedará á cargo de dichos agentes la representacion de los herederos ausentes y de los menores ó incapacitados.

6.ª Administrar y liquidar por sí, ó por persona que nombren bajo su responsabilidad, la testamentaría ó abintestato, sin que la autoridad local tenga que intervenir en estas operaciones, salvo si súbditos del país ó de una tercera Potencia tuviesen que hacer valer derechos en la sucesion; pues en este caso, si se suscitasen dificultades procedentes principalmente de alguna reclamacion, que dé lugar á contiendas entre partes, no teniendo los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules ó agentes consulares derecho para dirimir esas dificultades ó resolverlas, deberán conocer de ellas los tribunales del país, á los que corresponde proveer y fallar sobre la misma.

Los referidos cónsules generales, cónsules, vice-cónsules ó agentes consulares, obrarán entonces como representantes de la testamentaría ó abintestato, es decir, que conservando la administracion y el derecho de liquidar definitivamente la herencia, como tambien el de realizar ventas de efectos en los términos anteriormente prevenidos, velarán por los intereses de los herederos, pudiendo designar los abogados encargados de sostener sus derechos ante los tribunales, entendiéndose que suministrarán á estos los papeles y documentos oportunos para ilustrar la cuestion que se someta á su fallo.

Dictada la sentencia, los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules ó agentes consulares, deberán ejecutarla, si de ella no se interpusiese apelacion, y continuarán entonces de pleno derecho la liquidacion que se haya suspendido hasta la terminacion del litigio.

Y 7.ª Organizar, si há lugar á ello, la tutela ó curatela, con arreglo á las leyes de su país.»

Si falleciere un súbdito de cualquiera de las dos naciones, en punto en que no haya agente consular de la respectiva, la autoridad local procederá á inventariar y poner en seguro los bienes y efectos de la testamentaría, conforme á las leyes del país, dando cuenta sin dilacion al agente consular más inmediato, y en su defecto al cónsul general respectivo, ó al ministro diplomático de la nacion del finado (art. 20).

«Art. 21. Los cónsules generales, cón-

sules, vice-cónsules y agentes consulares de ambas naciones, conocerán esclusivamente de los actos de inventario y de las demás diligencias preventivas, para la conservacion de los bienes hereditarios, dejados por la gente de mar, y pasajeros de su país que fallecieren en tierra, ó á bordo de los buques del mismo, durante el viaje, ó en el puerto adonde arribaren.....

»Art. 29. Todas las cláusulas de este convenio, concernientes á las testamentarías, abintestatos, naufragios y salvamentos, serán aplicables á las posesiones ultramarinas de uno y otro Estado, con las reservas contenidas en el régimen especial, á que están sometidas dichas posesiones.»

El presente convenio durará por diez años: si al décimo no anunciase la cesacion alguna de las partes, seguirá hasta un año despues de que se haya hecho tal declaracion (art. 30).

Contiene este convenio la cláusula, ya universal, de *nacion más favorecida*.

En un protocolo adicional se establece que, salvos los refugiados políticos, no podrán residir los súbditos de una nacion en la otra, sin la cédula correspondiente de matrícula.

Cerdeña. En 3 de Abril de 1856 se estipuló un estenso convenio consular con dicho Estado. Pero, como ya no rige, y se halla refundido en otro, de que luego damos razon, entre España y el nuevo reino de Italia, no hacemos esposicion de él. Indicarémos únicamente que en él los cónsules generales y los cónsules estaban autorizados á nombrar vicecónsules y *agentes* consulares, donde estimaran conveniente, salva la aprobacion y *exequatur* del Gobierno del territorio (artículo 5.°).

La detencion ó arresto de los desertores seria de *tres meses*; y si dentro de ellos no eran trasladados á sus buques, ó héchose cargo de ellos el cónsul, se les pondria en libertad, dando aviso al cónsul con tres dias de anticipacion. El arresto y entrega no tendria lugar si el desertor era súbdito del país, en que habia de pedirse (art. 11).

No solo los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules; sino tambien los cancilleres, secretarios, agregados y alumnos consulares respectivos, gozarian de los privilegios y consideraciones que los de la nacion mas favorecida (art. 14).

El convenio no tendria aplicacion *á nuestros dominios de América*, mientras continúe el sistema consular de los mismos, aunque los cónsules de Cerdeña gozarian allí de las prerogativas de que gozasen los de la nacion mas favorecida (art. 15).

Ultimamente, en él se consignaba espresamente el que ya es sistema general, sobre escudo de armas y de bandera nacional. «Podrán colocar, decia, *sobre la puerta esterior* de su casa, *el escudo* de armas de su nacion, con la inscripcion siguiente: *Consulado de.....* Y en los dias de solemnidades públicas, nacionales ó religiosas, *podrán enarbolar la bandera de su nacion*, en la casa consular, siempre que no residan en la Córte, donde está la legacion de su país.» Podian tambien enarbolarla en el bote que los conduzca por el puerto á los buques de su nacion (art. 2.°).

Italia. Las vicisitudes políticas de aquella Península transformaron el reino de Cerdeña en reino de Italia, cuya mayor estension, y nuevas leyes indujeron la necesidad de sustituir en nuestras relaciones consulares el ya citado convenio con Cerdeña en el celebrado con dicho reino de Italia en 2 de Noviembre de 1867. Es casi una reproduccion, como tambien del convenio con Francia, que luego se espondrá, por lo que omitimos su insercion, pudiendo consultarse en caso necesario. En él se reitera el derecho consular, ya generalizado, del uso del escudo de armas y bandera nacional, ya en la portada del cónsul, ya esta última en el bote de visita á los buques de su nacion.

Tiene además de singular que en una y otra nacion se reconoce la representacion y personalidad de las sociedades anónimas y demás comerciales, industriales y de crédito, constituidas entonces, ó que en adelante se constituyesen, conforme á las leyes de cada país (art. 5.°).

Concluye este convenio, como todos los de su clase, con la cláusula, efecto de la movilidad del comercio y de la industria, de que

regirá por nueve años; si bien, no anunciándolo dentro del último año de dicho período la nacion que desee la cesacion, regirá hasta un año despues de que se haga tal declaracion: debiendo notarse, que no verificándose de ordinario la renovacion, sino por *cambio de notas*, no aparecen nuevos tratados sucesivos, lo que, en caso dado, ha de puntualizarse por la secretaría de Estado de cada país.

Francia. Asimismo se ajustó con ella el convenio consular de 22 de Marzo de 1862, estenso y circunstanciado. En lo relativo á la facultad de nombrar agentes consulares, prerogativas, funciones y fé pública de estos, inviolabilidad de archivos, etc., es en un todo igual al ajustado entre España y Portugal, ya reseñado, y allí puede verse. En punto á derechos civiles de los súbditos respectivos, es ámplio, como pocos; por lo que no podemos menos de hacer mencion espresa de ello, con indicacion tambien de alguna cláusula y circunstancia, que especialmente lo requiere, notando de paso que entre ambas naciones ya habian mediado los convenios consulares de 2 de Enero de 1768 y 13 de Marzo de 1769, en el que, como venia aun siendo de práctica universal, se consignaba, que los cónsules podrian poner sobre las puertas de sus casas un cuadro con la leyenda *Consulado de.....*

«Art. 1.° Los súbditos de los dos países podrán viajar y residir en los territorios respectivos, como los nacionales: establecerse donde quiera que lo juzguen conveniente para sus intereses: adquirir y poseer toda clase de bienes muebles é inmuebles: ejercer todo género de industria: comerciar, tanto al por mayor, como al por menor: alquilar casas, tiendas y almacenes que les sean necesarios: efectuar trasportes de mercancías y de dinero, y recibir consignaciones, así del interior, como del esterior, pagando los derechos y patentes, y observando en todos estos casos las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos vigentes para los nacionales.

Tendrán el derecho de establecer en todas sus compras y ventas el precio de los efectos, mercancías y objetos, cualesquiera que sean, tanto importados, como nacionales, ya sea, que los vendan en el interior, ó que los destinen á la esportacion, sujetándose á las leyes y reglamentos del pais.

Les será lícito desempeñar sus negocios por sí mismos, y hacerse sustituir por personas debidamente autorizadas, bien sea en la compra y venta de sus bienes, efectos y mercancías, ó bien en la carga, descarga y espedicion de sus buques.

»Art. 2.° Los españoles en Francia y los franceses en España gozarán recíprocamente de una constante y completa proteccion para sus personas y propiedades. Tendrán en su consecuencia libre y fácil acceso á los tribunales de justicia, para reclamar y defender sus derechos en todos los grados de la jurisdiccion establecida por las leyes: podrán emplear en todas las instancias los abogados, procuradores y agentes de todas clases, que crean apróposito, y disfrutarán, en fin, bajo este concepto, de los mismos derechos y ventajas que se hayan concedido ó concedieren á los nacionales.

»Art. 3.° Los súbditos del uno y del otro Estado, que quieran dedicarse al comercio, ó establecerse con cualquier objeto en los países respectivos, deberán estar provistos de una papeleta de matrícula, en que conste su calidad de españoles, ó de franceses, que les será espedida por los agentes diplomáticos ó consulares de su pais á la presentacion de los documentos, que acrediten su nacionalidad. Esta papeleta será visada por las autoridades territoriales competentes, y servirá de título al que la obtenga para justificar su nacionalidad y la identidad de su persona en las gestiones que tenga que practicar, sea cerca de los agentes de su nacion, sea cerca de las autoridades del país. Sin la presentacion de la referida papeleta de matrícula, las autoridades españolas no consentirán en ningun caso la residencia de los franceses en España, ni las autoridades francesas la de los españoles en Francia.

»Art. 4.° Los españoles en Francia y los franceses en España estarán sujetos al pago de las contribuciones, tanto ordinarias, como estraordinarias, correspondientes á los bienes inmuebles, que posean en el país de su residencia, y á la profesion é industria que en él

ejerzan, conforme á las leyes y reglamentos generales de los Estados respectivos. Igualmente estarán sujetos, como los súbditos del pais, á los cargos y á las prestaciones personales, y tambien al pago de los impuestos municipales, urbanos, provinciales ó departamentales, que pesen sobre sus bienes muebles ó sobre su industria ó profesion.

Estarán por lo demás exentos, tanto los españoles en Francia, como los franceses en España, de toda contribucion de guerra, anticipos, préstamos, empréstitos y de toda otra contribucion estraordinaria, cualquiera que sea su naturaleza, que se establezca en uno de los dos paises, en virtud de circunstancias escepcionales, á no ser que se imponga sobre la propiedad inmueble.

Tambien estarán exentos de toda carga, empleo municipal ó concegil, y de todo servicio personal, ya sea en los ejércitos de tierra ó de mar, ó ya en la guardia ó milicia nacional, así como de cualesquiera requisas ó servicios especiales de la milicia, con tal que presenten la certificacion de su matrícula, espedida por la respectiva embajada, legacion ó consulado.

Sin embargo, los españoles en Francia y los franceses en España, que posean bienes raices, y tengan algun establecimiento comercial ó industrial, se hallarán sujetos, en igual grado que los nacionales, á la carga de alojamientos militares.

»Art. 5.° Los franceses nacidos en España, que sean llamados al servicio de las armas, deberán, en el caso de que los documentos presentados por ellos no se estimasen suficientes para justificar su orígen, producir ante las autoridades competentes, el año siguiente cuando se verifique el nuevo sorteo, una certificacion, acreditando que han cumplido con la ley de reclutamiento en Francia. Y recíprocamente los españoles nacidos en Francia, y que á la edad de 20 años sean comprendidos en el contingente militar, deberán presentar á las autoridades civiles ó militares competentes, una certificacion acreditando que han entrado en quinta en España.

A falta de dicho documento en buena forma, el individuo llamado por la suerte al servicio de las armas en el distrito donde haya nacido, deberá formar parte del contingente militar de dicho distrito.

»Art. 6.° Los súbditos de los dos Estados podrán disponer, como les convenga, por donacion, venta, permuta, testamento ó de cualquiera otra manera que sea, de todos los bienes que posean en los territorios respectivos. Asimismo los súbditos de uno de los dos Estados, que sean herederos de bienes situados en el otro, podrán suceder sin impedimento en aquellos de dichos bienes, que les correspondan, aun en abintestato; y los indicados herederos ó legatarios no tendrán que pagar otros, ni mas elevados derechos de sucesion, que los que paguen en casos semejantes los mismos nacionales.

»Art. 7.° Los súbditos de los dos paises no podrán sufrir respectivamente ningun embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquiera clase, para ninguna espedicion militar, ni para servicio público de ninguna especie, sin conceder á los interesados una indemnizacion, préviamente convenida; y estarán, no obstante, sujetos al servicio de bagajes, teniendo derecho en este caso á la remuneracion, que esté oficialmente fijada por la autoridad competente en cada provincia ó localidad para los súbditos del país.»

Desde luego, y en cuanto á derechos consulares, en lo relativo al uso de escudo de armas y de bandera nacional, este convenio es igual en un todo al mencionado entre España y Cerdeña (art. 13).

Cada nacion puede nombrar, no solamente cónsul general y cónsules particulares; sino tambien vice-cónsules y *agentes* consulares (artículo 8.°); como los primeros y segundos pueden nombrar tambien vice-cónsules y agentes con la aprobacion del Gobierno territorial (art. 16).

Pueden pedir detencion y entrega de los mendigos y vagabundos en su país, para estraerlos á su costa (id. 17).

Muerto sin testamento un súbdito de la nacionalidad del cónsul, y en todo caso sin nombrar testamentarios; ó si los herederos fuesen menores ó ausentes, el cónsul respec-

tivo, vicecónsul ó agente, en sus casos, procederán en la forma siguiente:

A poner los sellos de oficio, ó á peticion de parte legítima, sobre todos los efectos y papeles del finado, dando aviso prévio á la autoridad local, que podrá, ó no, concurrir á poner los suyos.

Los sellos no podrán levantarse sin la concurrencia de la autoridad local, salvo que invitada, no concurra dentro de 48 horas, en cuyo caso los levantará solo el agente consular.

Con asistencia de la autoridad local, á menos de no concurrir siendo citada, se formará inventario. La asistencia de aquella autoridad no ocasionará costas.

Procederán á la venta, en pública subasta, de los muebles y semovientes, que no puedan conservarse, así como de los frutos y efectos, presentándose ocasion aceptable.

Convocar por los periódicos del país, ó de ambos, á los acreedores, y constituir en depósito seguro los bienes, créditos y rendimientos, concurriendo la autoridad local, si se presentan acreedores ó herederos del país, ó de otra nacion.

Concurriendo acreedores, y habiendo recursos, empezarán los pagos á los 15 dias de concluido el inventario, salvo que otra cosa determinen aquellos con el cónsul. Los acreedores podrán provocar, en su caso, el concurso necesario, que se seguirá conforme á las leyes del país. La representacion de los menores y ausentes, quedará á cargo del cónsul.

Las cuestiones de derecho se ventilarán ante los tribunales.

No llegando ese caso, ni el de concurso, los cónsules administran la testamentaría, liquidan y pagan.

Dictada sentencia, la ejecutarán, siguiendo en lo demás administrando y liquidando.

Organizarán la tutela ó curatela, si se dá el caso, conforme á las leyes de su país (artículo 20).

Si muere un francés en España, ó un español en Francia, en punto donde no haya agente consular, la autoridad prevendrá lo conveniente para la seguridad de sus bienes, dando cuenta inmediatamente al cónsul mas inmediato, ó á la legacion respectiva; y presentándose el cónsul, él solo se incautará y continuará la testamentaría, segun se previene en el art. 20 (art. 21).

Los cónsules conocerán esclusivamente de los autos de inventario y prevencion, por muerte de algun hombre de mar de su nacion (id. 22).

No se verificarán visitas en los buques, ni se procederá á comparecencias ó declaraciones judiciales, sin prevenir al agente consular respectivo. Si no compareciera, por sí ó por delegado, á la hora señalada con precision, se verificará el acto sin él (id. 23).

Solo los cónsules arreglan las diferencias en los buques y entre gentes de mar de su nacion; salvo que trasciendan al órden público, en cuyo caso tienen competencia las autoridades locales (id. 24).

Cuando naufrague ó encalle un buque de la otra nacion, las autoridades locales prevendrán lo conveniente, hasta que se presente el cónsul, al cual, y en su defecto al mas inmediato, darán parte sin dilacion, y presentándose, él procederá esclusivamente; salvo que resultaren interesados individuos de otra nacion, en cuyo caso tendrá intervencion la autoridad local. Las mercancías y efectos salvados del naufragio, salvos los derechos y gastos de salvamento, no estarán sujetos á derechos de aduana, ni otra imposicion, á no ser que se destinaren al consumo interior (id. 27).

Las disposiciones de este convenio, relativas á ab-intestatos, naufragios y salvamentos, serán aplicables en las posesiones ultramarinas respectivas, salvo el régimen especial de las mismas.

Desde el cónsul al agregado consular, dados á reconocer y reconocidos, gozarán de las prerogativas que los de la nacion mas favorecida (id. 30).

Países Bajos. En 3 de Febrero de 1866, se formalizó, y se ratificó en 10 de Abril, entre España y los Países Bajos, un convenio consular, en virtud del que los agentes consulares de esta nacion gozarán en los dominios ultramarinos de España de las franquicias y prerogativas que los de la nacion

mas favorecida, y recíprocamente los de España en los Paises Bajos. Y establécese así bien, que dicho convenio continuará en vigor doce meses, despues que una de las partes contratantes manifieste su ánimo de no continuar.

Bélgica. En 19 de Marzo de 1870 se formalizó un convenio consular con esta potencia. Conteniendo la cláusula de nacion mas favorecida, es igual á los de Francia, Portugal y demás de la propia clase, en cuanto á prerogativas consulares, y derechos de los súbditos, en tierra y de la marina. Pueden dichos agentes colocar sobre las puertas del consulado el escudo de armas de su nacion, é izar el pabellon nacional. Su casa goza de inmunidad, pero no de derecho de asilo (art. 6.°). No están obligados á declarar como testigos; pero sí á prestar declaraciones é informes que les pidan las autoridades, yendo esta á la casa consular, ó pidiendo que las evacuen por certificacion. Este convenio será por seis años. Si una de las partes no anuncia con doce meses de antelacion al año último del plazo, continuará por un año mas.

Prusia. Convenio celebrado en 22 de Febrero de 1870 y ratificado en 22 de Abril. En un todo igual á los de su clase, y por tanto al último de Portugal. Durará por 10 años, y si ninguna de las partes anuncia la cesacion dentro del último año, regirá por un mes. Es tambien estensivo á Ultramar, con la cláusula de *nacion mas favorecida.*

Persia. En el tratado de amistad y comercio, de 13 de Noviembre de 1850, con Persia, se estipuló que España podrá tener un agente consular en la córte de Teherán, y otro en Tauris; y Persia uno en Madrid y otro en Barcelona, ú otro puerto que se prefiera (artículo 4.°).

Ultramar. Notaremos, como regla general en este punto, que todos los tratados de *reconocimiento* de la soberanía independiente de las repúblicas americanas, que fueron dominios españoles, se estipula la facultad recíproca de nombrar agentes consulares, estipulándose además que *gozarán estos de los derechos y prerogativas que los de las naciones mas favorecidas.* Tales son los tratados de reconocimiento, paz y amistad de 25 de Abril de 1844 con Chile, 30 de Marzo de 1845 con Venezuela, 21 de Julio de 1847 con Bolivia, y 25 de Julio de 1850 con Nicaragua.

Islas Hawaiianas. Tratado de paz, amistad, navegacion y comercio, de los derechos civiles de los súbditos de una y otra de las partes, ajustado en Lóndres, en 29 de Octubre de 1863, ratificado en 29 de Junio de 1864, y publicado en 25 de Mayo de 1870.

En todos sus objetos, como se dice en sus lugares oportunos, es bastante ámplio: en punto á cónsules generales y demás agentes consulares, se establecen, como decimos en los convenios anteriores, bajo el pié *de la nacion mas favorecida* (arts. 19 y 20).

Este tratado durará diez años, á contar 6 meses despues de la ratificacion, y con la cláusula ordinaria de que si alguna de las partes no anuncia su cesacion en todo el último año, seguirá por un año, y así sucesivamente (art. 27).

República del Salvador. Tratado de reconocimiento, paz y amistad, firmado en 24 de Junio de 1865, y publicado en 30 de Junio de 1866. Se establecen agentes consulares en la forma acostumbrada, y bajo el pié de la nacion mas favorecida (art. 10).

Uruguay (República oriental). Protocolo firmado en 25 de Junio de 1870, y publicado en 9 de Noviembre de id. Se reduce á establecer, de una y otra parte, agentes consulares, bajo el pié cada una de la nacion mas favorecida.

China. Tratado de amistad, comercio y navegacion, ajustado en 1864, y publicado en 15 de Febrero de 1868.

Se establecen agentes consulares, cual *por derecho de gentes* está recibido en las demás naciones (art. 1.° al 5.°).

Todas las diferencias entre súbditos españoles, ya sobre derechos personales, ya reales, se someterán á la jurisdiccion de los cónsules españoles. Las controversias que ocurran en China entre súbditos españoles y los de otra nacion, se decidirán conforme á los tratados entre las naciones respectivas. Si interviniesen súbditos chinos, intervendrá tambien la autoridad local (art. 12).

Si un súbdito español recibe ofensa de un chino, acudirá á su cónsul para que gestione en su favor con las autoridades locales (idem 14).

Se establecen, en fin, las ventajas de *nacion mas favorecida* (art. 50).

No se limita la duracion del tratado.

Japon. Tratado de amistad, comercio y navegacion, firmado en 12 de Noviembre de 1868, y publicado en 12 de Octubre de 1869.

Sobre agentes consulares es igual al anterior de China.

SECCION IV.

NOVÍSIMA LEY ORGÁNICA, Y REGLAMENTO CON FUERZA DE LEY, SOBRE LA CARRERA CONSULAR.

Así habian venido las cosas, cuando en 31 de Mayo de 1870, se publicaron la mencionada ley y reglamento. La ley declara derogadas todas las *leyes, decretos* y *disposiciones* sobre servicio consular, que sean contrarias á ella (art. 17). No declara anulados, ni podia, los tratados y convenios consulares; y por ello, y para poder conocer las disposiciones legislativas y oficiales derogadas, ó no, ha sido forzoso dar al presente artículo la estension y forma que se vé. Ahora, sin perjuicio de haber de consultar en su caso la mencionada ley orgánica y reglamento, son notables en ellos las disposiciones siguientes:

»Art. 1.° (de la ley). La carrera consular es facultativa, y los empleados de la misma se dividen en las categorías siguientes:

1.° Cónsules generales.
2.° Cónsules de primera clase.
3.° Cónsules de segunda id.
4.° Vice-cónsules.
5.° Aspirantes.

»Art. 2.° Existirán además las clases de agentes consulares, que á continuacion se espresan, sin que sus individuos puedan ser considerados como empleados públicos:

1.° Los agentes mercantiles, que, con los títulos de cónsules y vice-cónsules honorarios, ejercen limitadas funciones de carácter puramente comercial.

2.° Los agentes consulares delegados por los cónsules en sus respectivas demarcaciones, para que les auxilien en el servicio que tengan á su cargo.

»Art. 3.° Los sueldos reguladores de los empleados de la carrera consular, para todos los efectos legales, serán los siguientes: cónsul general, escudos 4,000: cónsul de primera clase, 3,000: cónsul de segunda clase 2,000: vice-cónsul 1,200.

La diferencia que media entre estos sueldos y el haber total señalado en la ley de presupuestos, con arreglo á las condiciones especiales de la localidad, se considera como asignacion para gastos de residencia.....

»Art. 8.° Las vacantes en la carrera consular se cubrirán en el órden siguiente:

Dos se proveerán por rigurosa antigüedad en cesantes de la misma categoría; la tercera se conferirá al ascenso, y otra podrá concederse por eleccion en dicha clase de cesantes, con la condicion espresa de motivar las razones, en que se funda el nombramiento.

Cuando desaparezca la clase de cesantes, se destinarán dos vacantes á la antigüedad y una á la eleccion.

»Art. 9.° Los empleados activos y cesantes de la carrera consular, que no acepten el destino, que se les confiera, cuando este corresponda á su categoría, perderán el derecho de cobrar su haber de cesantía, y se colocarán en el último puesto del escalafon respectivo. Si al llegarles nuevamente el turno de ser colocados, volvieran á renunciar el cargo, se les dará de baja en la carrera.....

»Art. 10. El nombramiento para los empleados de las dos primeras categorías se hará por decreto, y el de las demás clases por órden ministerial, espresando las circunstancias del agraciado y el artículo de esta ley en que se halle comprendido.

»Art. 11. Ningun empleado podrá ser destituido del grado, que haya obtenido, sin que recaiga sentencia del tribunal competente, segun los casos previstos en el Código penal, ó se halle en los que define el art. 9.°

Para ser declarado cesante, salvo la supresion de su destino, deberá instruirse espe-

diente gubernativo, en el que consten las faltas que motivan su separacion, con audiencia del interesado y prévio informe de la seccion respectiva del Consejo de Estado.

En este caso, solo podrá volver al servicio activo, en virtud de nuevo espediente, y oido el Consejo de Estado en pleno.

»Art. 12. El Gobierno abonará á los empleados de la carrera consular los gastos de viaje para tomar posesion de sus destinos, y de los que verifiquen en comision del servicio, ó cuando sean trasladados ó ascendidos á otros puntos, en la forma que determina el reglamento; pero este abono no procederá cuando la traslacion haya sido solicitada por los interesados.

»Art. 13. Para los derechos de cesantía, jubilacion, abonos de tiempo de servicio y viudedades, se sujetarán los empleados de la carrera consular á lo ya dispuesto, ó á lo que prescriban en lo sucesivo las leyes generales para los demás empleados civiles, salvo las modificaciones que marca el reglamento en su artículo 70.....

»Art. 16. El reglamento, que se acompaña para la ejecucion de esta ley, formará parte integrante de la misma. En él quedan fijadas las atribuciones que corresponden á los empleados de cada categoría, teniendo presente lo dispuesto *en los tratados vigentes y el derecho público establecido*.....

»Art. 1.° (del reglamento). En todo Estado que mantenga relaciones de importancia con los dominios españoles, habrá un consulado general, y dependerán inmediatamente de este todos los consulados, vice-consulados, y agencias mercantiles, establecidos en el mismo.

»Art. 2.° En los Estados, donde no sea indispensable el establecimiento de un consulado general, ó en el caso de que circunstancias especiales no permitan el mayor gasto que ocasiona dicha categoría, se entenderán unidas sus atribuciones á las de la legacion establecida en el país.....

»Art. 8.° Los cónsules y vice-cónsules honorarios serán nombrados y separados por el Ministro de Estado.

Los delegados ó agentes consulares serán nombrados y separados por el cónsul, bajo cuya direccion y responsabilidad sirvan, prévia la aprobacion del Gobierno.....

»Art. 11. Los empleados consulares se considerarán asimilados en categoría á los diplomáticos en la forma siguiente: los cónsules generales á los encargados de negocios: los cónsules de primera clase á los secretarios de legacion de primera clase: los cónsules de segunda clase á los secretarios de segunda clase: los vice-cónsules á los secretarios de tercera clase: los aspirantes á los agregados.....

»Art. 14. Los funcionarios de la primera y segunda categoría tendrán el tratamiento de *señoría*, salvo el superior, que por otros conceptos pueda corresponderles. En las relaciones oficiales, sin embargo, el funcionario de mayor gerarquía no dará al inferior tratamiento superior al que disfrute por razon de su categoría personal.....

»Art. 18. Ningun empleado consular podrá admitir la regencia de un consulado estranjero, sin la aprobacion prévia del Gobierno. Solo podrán encargarse provisionalmente, en casos de urgencia, de la proteccion de los súbditos estranjeros y custodia de los archivos, que les sean entregados en depósito, con la obligacion de dar cuenta inmediatamente al Ministerio y al jefe de la legacion residente en el país.....

»Art. 29. Los empleados consulares deberán emprender su viaje, para tomar posesion del destino, al mes de haber recibido su nombramiento. Solo por causas, debidamente justificadas, á juicio del Gobierno, podrá prorogarse por otro plazo igual, á no ser que existan razones de otra índole, que impidan la salida por un tiempo indeterminado.....

»Art. 32. El Gobierno podrá trasladar libremente á los empleados consulares de uno á otro punto del estranjero, siempre que no desciendan de categoría, pero con las limitaciones prescritas en el art. 34.

»Art. 33. Los empleados, que hagan renuncia de su destino por conveniencia propia, quedarán cesantes; pero sin derecho á disfrutar haberes pasivos durante el tiempo de su separacion del servicio, dándoles defi-

nitivamente de baja despues de trascurridos dos años.

»Art. 34. Los empleados consulares no podrán ser trasladados de una á otra residencia, sino despues de haber permanecido tres años por lo menos en el mismo destino. Los que se encuentren, ó sean destinados á los consulados en la América del Sur, Méjico, Nueva Orleans, China, el Japon y Sierra Leona, podrán solicitar su traslacion á alguno de Europa, despues de trascurridos cuatro años, y no podrán ser nuevamente nombrados para dichos puntos contra su voluntad.

»Art. 35. El Estado costeará el viaje de ida á los empleados, que se dirijan á tomar posesion de sus destinos, y el de regreso cuando cesen definitivamente en ellos.

»Art. 36. El coste de los viajes de ida y vuelta se abonará con arreglo á la tarifa siguiente:

A los cónsules generales y cónsules de primera clase, 200 milésimas por kilómetro de ferro-carril: 1,500 id. por legua terrestre: 200 idem por milla marítima.

A los cónsules de segunda clase y vice-cónsules, 100 milésimas por kilómetro en ferro-carril: 1,500 id. por legua terrestre: 100 idem por milla marítima.....

»Art. 40. Los viáticos se pagarán cuando los interesados estén prontos á salir para su destino ó comision, autorizada por el Gobierno, ó cuando sean declarados cesantes.

»Art. 41. Cuando los empleados consulares no lleguen á salir para su destino ó comision, autorizada por el Gobierno, despues de haber percibido el viático, estarán obligados á devolverlo por entero. Si saliesen, y no llegasen al punto de su destino por disposicion del Gobierno, ó por cualquiera otra causa, independiente de su voluntad, se les abonará la suma correspondiente á la distancia que hubiesen recorrido á la ida y á la vuelta; ó la cantidad que hubiesen satisfecho al suspender su viaje; debiendo devolver el remanente de lo percibido, ó percibir la diferencia que resulte de más, en el caso de ser aquella insuficiente para cubrir la referida atencion. Si no llegasen al punto de su destino; ó si despues de llegar no tomasen posesion del cargo por razones personales, quedarán obligados á devolver por entero lo que hubiesen recibido, ó se descontará de sus sueldos, ó en defecto de esto, de sus bienes.

Los que estando en posesion del cargo lo abandonasen, sin probar objeto del servicio público, quedarán cesantes.

»Art. 42. Los empleados consulares no recibirán sueldo alguno durante su viaje de ida y vuelta, porque se supone embebido en el viático que se les concede. Se considerará, sin embargo, como tiempo de servicio, para los efectos de cesantía y jubilacion, el que empleen en su traslacion de un destino á otro, así como el que inviertan en sus viajes, al ser colocados de nuevo y al cesar definitivamente en sus cargos, sujetándose en estos últimos casos á lo que se desprende de la tabla núm. 1.

»Art. 43. Las familias de los empleados consulares, fallecidos en activo servicio, tendrán derecho al viático de regreso, que en vida hubiese correspondido á éstos, cuando se hallaren en su compañía y se restituyan á España.....

»Art. 45. Los empleados consulares, al cesar en sus cargos, entregarán bajo inventario á su sucesor los sellos, escudo y bandera del consulado, así como todos los efectos moviliarios de la cancillería que, debiéndose adquirir préviamente con aplicacion á la cantidad asignada para el material, constituyen una propiedad del Estado. Este inventario se redactará con la debida separacion de los objetos que les han sido entregados y de la parte que han adquirido.....

»Art. 49. A los cónsules, establecidos en Oriente, se les autoriza para cargar en cuenta de gastos estraordinarios el sueldo anual de un *cavás*, y el coste cada dos años de los uniformes de uno á dos genízaros, segun las necesidades é importancia de la agencia....

»Art. 59. En los consulados, cuyos derechos obvencionales se recauden por cuenta del Estado, el vice-cónsul devengará, durante la ausencia del cónsul, la mitad de la parte señalada á éste para los gastos de residencia, y la asignacion para los ordinarios por entero, siendo de su cuenta el abono de

la gratificacion al canciller encargado de las funciones de recaudador.....

»Art. 69. El Gobierno podrá jubilar á los empleados consulares, cuando se hallen completamente inútiles, ó hayan cumplido la edad de 65 años, y reunan los servicios necesarios al efecto, prévia la formacion del respectivo espediente. Los empleados tendrán derecho á la jubilacion, despues de 20 años de servicio, si han cumplido la edad de 60, ó justifican incapacidad física ó moral antes de cumplirla.....

»Art. 76. Los empleados consulares de todas categorías, á escepcion de los aspirantes, están obligados á tener el uniforme de la carrera, con arreglo al modelo aprobado.....

»Art. 82. Ningun empleado de la carrera consular podrá usar de una condecoracion estranjera, sin que se halle debidamente autorizado por la superioridad, con arreglo á lo prescrito en la ley vigente.....

»Art. 84. Con sujecion á los reglamentos y disposiciones del Gobierno, compete al cónsul general, como jefe del servicio consular en un Estado ó zona determinada, ilustrar á los agentes que estén bajo su vigilancia y direccion, aclarando sus dudas, corrigiendo sus errores, y dándoles las instrucciones necesarias para la mas exacta observancia de las órdenes superiores, y para mantener la conveniente unidad en la accion administrativa.

Tendrán además á su inmediato cargo un distrito consular con las mismas atribuciones, que corresponden á los cónsules en el ejercicio ordinario de sus funciones.....

»Art. 90. Relativamente á la jurisdiccion, incumbe á los cónsules, cuando lo permitan los tratados y costumbres recibidas: 1.°, administrar justicia en lo civil y criminal, en primera instancia, entre súbditos y contra súbditos españoles: 2.°, conocer de las testamentarías y *ab-intestatos* de los españoles, que fallecieren en su distrito: 3.°, instruir diligencias sobre los accidentes de mar, y proceder á la liquidacion y repartimiento en los casos de avería, cuando fuesen españoles todos los interesados.....

»Art. 99. En los países donde existan legaciones, los empleados consulares se abstendrán de dirigir al Gobierno despacho alguno sobre asuntos políticos, que es atribucion propia y esclusiva del cuerpo diplomático, limitándose á cumplir las órdenes que reciban de la superioridad, ó del representante, en cuanto concierna á dicha materia.

»Art. 100. Cuando las necesidades del servicio ó las condiciones de la localidad, exijan alguna modificacion en este precepto, y siempre que preceda la oportuna autorizacion, los empleados consulares podrán dar noticias políticas directamente al Gobierno, poniéndolo al mismo tiempo en conocimiento del representante diplomático.»

En cuanto á la forma en que los cónsules y vice-cónsules han de ejercer su jurisdiccion, en su caso, véase el artículo siguiente, en el que se insertan las disposiciones de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, de 15 de Setiembre de 1870, relativas á esta materia.

Por Real órden de 5 de Febrero de 1870 se autoriza á los agentes consulares españoles en el estranjero, para espedir pasaportes para puertos estranjeros á buques mercantes de nueva construccion, ó nuevamente adquiridos, dando cuenta al Ministerio de Marina y conocimiento á la autoridad del puerto español á que se dirija. Véase **INTÉRPRETES** y **JÓVENES DE LENGUAS: ADUANA: SEGUROS MARÍTIMOS.**

CONSULES ESPAÑOLES DE LEVANTE Y BERBERIA (JURISDICCION CRIMINAL DE LOS). Ciertamente que sin ella, seria bien aventurada y precaria la seguridad de los súbditos españoles, ya emigrados, ya llevados á aquellas regiones por el tráfico ó la navegacion; y seria por demás descender á comparaciones entre la justicia local, y la justicia pátria, despues, sobre todo, que esta, aunque ejercida por los cónsules en país estraño, se subordinase al normal y recto criterio de los tribunales superiores y supremo del suelo pátrio, como al fin sucedió. Prepararon la base para ello los tratados, y empezamos haciendo mencion de ellos.

Es un hecho notorio que algunas naciones

europeas, consultando el bien de sus súbditos, residentes en los mencionados países, han procurado estipular que los cónsules respectivos, cuando súbditos de su nacion delinquen entre sí, puedan juzgarlos en forma. Y como por lo comun la España ha tratado con aquellos Soberanos, bajo el concepto y garantía de la *nacion mas favorecida*, de ahí el que nuestros cónsules, aun sin necesidad de concesion especial, vengan juzgando á los españoles, que allí delinquen contra españoles.

Pero todavia España ha procurado estipularlo así en sus tratados, y por ejemplo, en el ajustado con la Puerta Otomana, en 14 de Setiembre de 1782, se consignó que «los gobernadores, ni demás oficiales del Imperio Otomano, no podrán hacer encarcelar á ningun súbdito de S. M. Católica, ni molestarlo, ni injuriarlo sin razon; y si algun súbdito de S. M. Católica fuese preso, á la primera reclamacion de su ministro, ó cónsules, *les será consignado, para ser castigado segun lo merezca*» (cap. 6.°).

De la misma manera en el tratado de paz y comercio entre España y Marruecos, firmado en 28 de Mayo de 1767, se estipuló: «En las diferencias de los españoles entre sí, tanto civiles como criminales, *no conocerá otro alguno sino su cónsul*; y si este no se hallare presente, en las criminales, *se detendrá al agresor por las justicias, hasta que el cónsul disponga de él*» (art. 12).

En el tratado de paz y amistad entre España y la Regencia de Argel, firmado en 14 de Junio de 1786, se dijo así bien: «Residirá en Argel un cónsul de España *con todas las prerogativas que el de Francia, para entender* en todos los negocios de los españoles, *del mismo modo que el de Francia* en los de los franceses, *y tendrá toda jurisdiccion en las diferencias entre los españoles, sin que los jueces de la ciudad de Argel puedan tomar conocimiento en ellas*» (artículo 10).

Ya en igual tratado de paz, amistad y comercio con la Regencia de Trípoli, firmado en 10 de Setiembre de 1784, se habia consignado respecto del cónsul español: «*Será juez competente en todas las disputas y pendencias entre españoles, sin que los jueces de Trípoli puedan por ningun pretesto mezclarse en ellas*» (art. 34, cláusula 4.ª).

Tambien en tratado de paz, amistad, navegacion, comercio y pesca, con el Emperador de Marruecos, firmado en Mequinez, á 1.° de Marzo de 1789, se concertó: «El cónsul general de España y sus vice-cónsules ó comisionados, *dirigirán con absoluta jurisdiccion* los negocios de los españoles en los dominios marroquíes, *franqueándoles el Gobierno los auxilios* de tropa, lanchas armadas, ú otros *que pidan para arrestar y asegurar á los malhechores*, con cuyo medio se conservará el buen régimen y quietud pública» (art. 4.°).

Ultimamente en el tratado de comercio y navegacion, entre España y la Sublime Puerta, firmado en Constantinopla el 2 de Marzo de 1840, se consignó en su art. 1.°: «Se confirman de nuevo y para siempre todos los derechos, privilegios é inmunidades, concedidas á los súbditos y buques españoles por las capitulaciones y tratados vigentes, escepto las cláusulas especialmente modificadas por el presente tratado, entendiéndose además espresamente, que todos los derechos, privilegios y prerogativas *que la Sublime Puerta concede en la actualidad, ó pudiera conceder en adelante á los súbditos y buques de cualquiera otra potencia*, los concederá igualmente á los súbditos y buques de españoles, para que sea estensivo á estos su disfrute y ejercicio.»

En vista de ello, autorizado el Gobierno para organizar la justicia criminal, introduciendo en el nuevo Código penal las reformas, que fuesen indispensables, dando de ello cuenta á las Córtes, como en tiempo y forma se verificó, en 29 de Setiembre de 1848 publicó el siguiente Real decreto con fuerza de ley.

«Art. 1.° Los cónsules españoles en países estranjeros, los vice-cónsules ó las personas, que en ausencias ó enfermedades hagan sus veces, en los casos de justicia entre súbditos ó contra súbditos españoles, respecto de todo aquello á que no se opongan la legislacion del país, la costumbre ó los tratados vi-

gentes, para los efectos de apelacion y demás judiciales, se reputan respectivamente jueces de paz, de correccion y de primera instancia, con las mismas atribuciones y sujetos á las mismas formalidades, que establecen ó establecieren las leyes, decretos y Reales órdenes para los de su clase en España, salvas las escepciones y modificaciones que adelante se espresarán.

»Art. 2.° Cuando proceden como jueces de primera instancia, dictarán sus providencias definitivas, ó que tengan fuerza de tales, con acuerdo de asesor, siendo posible: en otro caso se acompañarán con dos adjuntos, elegidos entre los súbditos españoles.

Los adjuntos prestarán juramento de cumplir bien y fielmente su encargo, y serán conjueces con voto deliberativo.

Los adjuntos podrán ser nombrados para cada año, ó para casos particulares, segun fuere posible.

»Art. 3.° En los casos indicados en el artículo anterior, dos votos conformes de los tres harán sentencia.

Si cada uno hiciere voto singular, se nombrará un tercer adjunto.

Si no pudiere ser habido, ó si todavía no resultasen dos votos conformes, hará sentencia el del cónsul ó vice-cónsul, como voto de calidad.

»Art. 4.° En cuestiones mercantiles, á falta de súbditos españoles, los adjuntos podrán ser dos cónsules ó vice-cónsules, y no siendo posible, súbditos de otra nacion con domicilio fijo y buena nota. En estos casos no habrá sentencia sin el voto del cónsul, y podrá hacerla él solo, al tenor de lo dispuesto en el párrafo último del artículo anterior; pero no los adjuntos solos, aunque estuvieren conformes.

»Art. 5.° Así en en los asuntos civiles, como en los criminales, el cónsul y los adjuntos que discordaren, razonarán su voto por escrito, uniéndose este á los autos, y en todo caso se pondrá por diligencia, razonándose la discordia.

»Art. 6.° Respecto de todo aquello, en que las circunstancias locales, la perentoriedad é índole especial ó escepcional de los casos lo permitiese, los tribunales consulares observarán en el procedimiento las leyes del Reino: cuando por dichas causas no fuere posible, se hará constar así por diligencia en los autos ó por providencia razonada.

Los tribunales de alzada apreciarán estas omisiones, con arreglo á las circunstancias de cada caso y á las de localidad.

Los fallos definitivos se ajustarán siempre á las leyes del Reino.

»Art. 7.° Donde hubiere cónsul y vice-cónsul, uno y otro conocerán á prevencion de los juicios de paz, y de los verbales, de que pueden ó pudieren conocer los alcaldes.

En los juicios correccionales para la aplicacion de lo dispuesto en el libro tercero del Código penal, conocerán el vice-cónsul en primera instancia, y el cónsul en apelacion, al tenor de lo prevenido en las reglas 3.ª y 4.ª (hoy 1.ª y 11.ª) de la ley provisional dictada para la observancia del mismo código.

Si no hubiere mas que cónsul, ó vice-cónsul, el mismo conocerá por sí solo en primera instancia de la correccion de faltas, al tenor de la citada regla 3.ª (hoy 1.ª) de la ley provisional; y con asesor ó adjuntos, segun se previene en el artículo 2.° del presente decreto, por apelacion, conforme á la regla 4.ª (hoy 11.ª) de la misma ley.

»Art. 8.° Los comisionados ó agentes, nombrados para suplir al cónsul en los puntos distantes de su demarcacion, procederán en casos de justicia, como delegados del mismo, el cual, al nombrarlos, hará la delegacion y dará las instrucciones oportunas, segun las circunstancias y necesidades locales, para que los súbditos españoles hallen siempre la justicia y proteccion debida.

»Art. 9.° En todos estos juicios desempeñará el cargo de secretario el canciller del consulado ó el que hiciere sus veces.

»Art. 10. Cuando lo permitan el número y calidad de los súbditos españoles, se habilitará de entre los mismos un representante fiscal, para aquellos casos, en que la ley requiere su intervencion.

»Art. 11. Con arreglo á la práctica general seguida hasta el dia, en todos los juicios civiles, tendrá jurisdiccion y competencia el

tribunal consular, hasta dictar sentencia definitiva, ora como juez ordinario, ora como árbitro ó arbitrador, en sus respectivos casos.

»Art. 12. En la parte criminal procederá asimismo dicho tribunal, hasta dictar sentencia, respecto de todas aquellas causas, cuyos delitos no tengan señalada por el Código mayor pena que la de arresto mayor ó menor, suspension, sujecion á la vigilancia de la autoridad, destierro, presidio y prision correccionales, al tenor de lo dispuesto sobre las mismas en el art. 26 (hoy 29) del Código penal.

En los demás casos, completo el sumario, y sacando de él copia á la letra, se remitirá con el reo y con las formalidades que en el dia se practican, á los tribunales de la Península, ó provincias de Ultramar, segun el caso.

La copia del sumario, cotejada ante el cónsul y asesor, ó jueces, firmada por los mismos, y por los reos, si supieren hacerlo, y autorizada por el canciller, se dirigirá al Ministerio de Estado, y por este al de Gracia y Justicia, para su remision al tribunal competente; y en caso de estravío de las actuaciones originales, producirá la copia los mismos efectos.

»Art. 13. Habiendo ya radicado la causa en el tribunal consular, y siendo su remision á los tribunales del Reino efecto de necesidad y no de incompetencia, se entenderá aquella con la calidad del fuero personal, causado en el tribunal remitente, sin perjuicio del de clase, escepto en el caso de que el crímen ó delito causen desafuero.

En su consecuencia, y atendiendo al fuero de *ubicacion*, ó permanencia accidental en el punto de arribada ó de la entrega, si el reo pertenece al fuero comun, ó si el delito ó crímen causa desafuero, continuará la causa el juez de primera instaecia del partido, en que fuere entregado el reo con la misma.

Si el delito no causare desafuero, y el encausado, por ser militar, ó por cualquier otro motivo legal, gozare fuero de clase, continuará el proceso el tribunal competente respectivo, del territorio en que fuese entregado.

»Art. 14. No obstante lo determinado en el precedente artículo, á fin de obtener los saludables efectos del escarmiento, que produce siempre la circunstancia de que los reos sean juzgados en el punto, en que se perpetró el delito, cuando éste, en vez de haberse cometido en el estranjero ó en el mar, lo hubiere sido en la Península, islas adyacentes, ó provincias de Ultramar, y por las circunstancias del caso ó del país no ofreciere grandes riesgos ni dificultades la traslacion del reo, pasará este con el sumario al tribunal, en cuya demarcacion se hubiere perpetrado el hecho.

El juez inferior del punto de arribada no acordará, sin embargo, la traslacion sin consultar con su superior inmediato, ó sin que éste, enterado del caso, lo hubiere mandado de oficio.

»Art. 15. El capitan del buque, ó la persona ó fuerza encargada de la conduccion del reo con el sumario á los tribunales del Reino, hará entrega de uno y otro al juez de primera instancia; y no habiéndolo, á la autoridad judicial local del fuero ordinario del punto á que llegare, y en su defecto á la política ó militar, que dará conocimiento sin dilacion, bajo su responsabilidad, al juez de primera instancia del partido.

»Art. 16. Se arreglará por duplicado acta circunstanciada de la entrega por ante escribano, si lo hubiere, que firmarán tambien la persona ó jefe, que entrega, y la autoridad que recibe. Un tanto del acta se dará á aquel para su resguardo, agregando la otra al sumario. Igual diligencia se practicará, al hacer la remision, y entrega en su caso, el alcalde ó autoridad local al juez ó tribunal del partido, á quien debe verificarlo, al tenor de lo dispuesto en el art. 15.

»Art. 17. Si cuando fuere conducido el reo con la causa á los tribunales del Reino, le amenazare en la travesía riesgo de muerte, y por esta ú otra grave circunstancia quisiera hacer alguna declaracion ó revelacion, que pueda conducir á la administracion de justicia, la recibirá el capitan del barco ó encargado de la conduccion, ó persona á quien comisionare, ante escribano público, pudien-

do ser, y en su defecto, ante dos testigos, que firmarán con el jefe ó capitan y el declarante. Esta diligencia será entregada á su tiempo con el sumario, y sus firmas se reconocerán, siendo posible, al tiempo de la entrega, cuando se formalice el acta de ella de que habla el art. 13.

»Art. 18. Las apelaciones, en los casos prevenidos en el artículo 13, se interpondrán y admitirán respectivamente para ante la Audiencia territorial ó tribunal superior inmediato de los mismos.

»Art. 19. De las apelaciones, á que dieren lugar las providencias de los tribunales consulares, cuando proceden como juzgados de primera instancia, conocerá la Audiencia territorial mas inmediata de la Península ó posesiones de Ultramar. En su consecuencia, y á fin de evitar dudas y dificultades, que ya han ocurrido, respecto de los consulados de Africa, de los fallos pronunciados por los establecidos ó que se establecieren, desde el Cabo de Buena Esperanza inclusive hasta el Cabo Blanco, sobre las costas de Marruecos, irán las apelaciones á la Audiencia de Canarias: desde el Cabo Blanco hasta el Peñon de Velez, á la de Sevilla: desde el Peñon do Velez hasta Mostaganim, á la de Granada: y del resto de las costas de Africa y puntos de Levante, á la de Mallorca.

»Art. 20. A fin de evitar todo entorpecimiento en la pronta administracion de justicia, cuando los cónsules y vice-cónsules procedan como jueces de primera instancia, siempre que sea dable, se entenderán directamente con la Audiencia respectiva, sin perjuicio de dar conocimiento al Ministerio de Estado, si lo creyeren conveniente.

»Art. 21. Cuando las referidas Audiencias, administrando justicia, hubiesen de dictar providencias, que puedan rebajar el necesario prestigio de los cónsules, ó embaracen el ejercicio de sus atribuciones como tales, antes de llevarlas á ejecucion darán conocimiento á mi Ministro de Gracia y Justicia, que lo hará al de Estado, adoptando de comun acuerdo la resolucion que conviniere.

»Art. 22. Los cancilleres de los consulados, mientras lo son, se reputan notarios, con fé pública en lo judicial y escriturario dentro del distrito de aquellos. Los documentos que autorizaren harán fé en juicio y fuera de él en la demarcacion del consulado, y legalizados por el cónsul, en todo el Reino.

»Art. 23. Limitándose el presente decreto á lo puramente judicial, no se entienden restringidas ó modificadas por él las atribuciones de policía y buen gobierno, ni cualesquiera otras, que competen á los cónsules como tales.

»Art. 24. Del presente decreto se dará cuenta á las Córtes en la próxima legislatura.»

Y todavía en el tratado de paz y amistad, ajustado con Marruecos, y firmado en 26 de Abril de 1860, se estipuló que, en el tratado de comercio, que debia formalizarse, se concederian á los españoles todas las ventajas que *á la nacion mas favorecida* (art. 13): y se declararon en vigor los tratados que lo estaban antes de la última guerra (art. 14).

En el de amistad, comercio y navegacion, celebrado con China en 10 de Octubre de 1864, ratificado en virtud de la ley de 14 de Mayo de 1866, y publicado en la *Gaceta* del 15 de Febrero de 1868, además de concederse tambien á España y á los españoles todas las ventajas é inmunidades que *á la nacion mas favorecida* en el Celeste Imperio, respecto de la jurisdiccion de los cónsules se estipuló lo siguiente:

»Art. 12. Todas las diferencias que se susciten entre súbditos españoles, ya sean sobre derechos personales, ya versen sobre derechos relativos á la propiedad, se someterán á la jurisdiccion de los cónsules españoles.

Todas las controversias que ocurrieren en China entre súbditos de España y súbditos de otra nacion estranjera, serán arregladas segun los tratados que existan entre España y dichas naciones, sin ninguna intervencion de las autoridades chinas. Pero si en estas controversias se hallasen envueltos súbditos chinos, la autoridad local tomará parte en los procedimientos judiciales, como en los casos para los cuales se providencia en los artículos 13 y 14.

»Art. 13. Todo súbdito chino, que fuere culpable de cualquier acto criminal cometido

contra algun súbdito español, será reducido á prision y castigado por las autoridades chinas con arreglo á las leyes de China, precediendo la denuncia del cónsul español.

El súbdito español, que cometiere algun delito en China, será juzgado por el cónsul ó por cualquiera otro funcionario español público, autorizado al efecto segun las leyes de España, precediendo la denuncia de las autoridades chinas.

En caso de ocurrir delitos graves, tales como homicidio, robo con heridas de consideracion, atentado contra la vida, incendio premeditado, etc., el reo, despues de instruida la correspondiente sumaria, será remitido á Manila, para que allí se le aplique el castigo segun las leyes de España.»

Cuando un español haya sufrido ofensa de un chino, debe esponer su queja al cónsul, el cual paocurará terminarla amigablemente: y lo propio respecto del pago de deudas, estando obligadas las autoridades chinas á prender al deudor y compelerle al pago; y vice-versa (artículos 14 y 19).

Y en el tratado de amistad, comercio y navegacion, ajustado con el Japon en 12 de Noviembre de 1868, ratificado en virtud de la ley de 12 de Octubre de 1869, y publicado en la *Gaceta* de 31 de Enero de 1871, se conceden igualmente á los españoles todas las ventajas *de la nacion mas favorecida* en aquel imperio, y espresamente el derecho á ser juzgados por el cónsul y autoridades españolas. Sobre este punto dispone:

«Art. 5.° Todas las cuestiones que ocurran entre españoles, relativas á sus personas ó propiedades en los dominios de S. M. el Emperador (*Tenno*) del Japon, estarán sujetas á la jurisdiccion de las autoridades españolas constituidas en el pais.

»Art. 6.° Si llegaren á suscitarse cuestiones entre españoles y japoneses, el demandante deberá dirigirse á la autoridad de su pais. Esta, en union de la autoridad de quien dependa el demandado, tratará de dar al asunto una solucion equitativa.

»Art. 7.° Los japoneses, acusados de algun delito cometido contra españoles, serán reducidos á prision y castigados por las autoridades japonesas con arreglo á las leyes del pais. Los españoles, que cometan algun delito contra súbditos japoneses ó de cualquiera otro país, serán juzgados y castigados por el cónsul español, ó por otra autoridad española y segun las leyes españolas.

La justicia se administrará de una manera equitativa é imparcial, tanto por las autoridades españolas, como por las japonesas.»

En cuanto al fuero, de que antes pudieron disfrutar los que delincan en los antedichos consulados, téngase ahora presente, en los casos que ocurran, la unificacion de fueros, establecida por la ley de 6 de Diciembre de 1868.

Y respecto del procedimiento y forma en que los cónsules han de ejercercer su jurisdiccion criminal, en la *ley provisional sobre organizacion del poder judicial*, de 15 de Setiembre de 1870, se han dictado las disposiciones siguientes, que modifican algun tanto las del Real decreto de 29 de Setiembre de 1848.

»Art. 342. Los españoles que delincan en país estranjero y sean entregados á los cónsules de España, serán juzgados con sujecion á esta ley, en cuanto lo permitan las circunstancias locales.

Instruirá el proceso en primera instancia el cónsul ó el que le reemplace, si no fuese letrado, con el auxilio de un asesor, y en su defecto con el de dos adjuntos, elegidos entre los súbditos españoles, los cuales serán nombrados por él al principio de cada año, y actuarán en todas las causas pendientes ó incoadas durante el mismo.

Terminada la instruccion de la causa, y ratificadas á presencia del reo ó reos presuntos las diligencias practicadas, se remitirán los autos al tribunal español, que, atendida la naturaleza del delito, tenga competencia para conocer de él, y sea el más próximo al consulado en que se haya seguido la causa, á no ser que por fuero personal debiera ser juzgado el reo por distinta jurisdiccion que la ordinaria, si hubiera delinquido en España, en cuyo caso lo será por el tribunal superior correspondiente al fuero que disfrute.

»Art. 345. En las faltas cometidas en país

estranjero, en que sean entregados los que las cometan á los cónsules españoles, juzgará en primera instancia el vice-cónsul si lo hubiere, y en apelacion el cónsul con su asesor, si no fuere letrado; á falta de asesor, con los adjuntos de que habla el art. 342. Si no hubiere vice-cónsul, hará sus veces un súbdito español, elegido del mismo modo que los adjuntos, al principio de cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad á las leyes del Reino.

»Art. 346. Lo prescrito en esta seccion respecto á delitos cometidos en el estranjero, se entenderá sin perjuicio de los tratados vigentes, ó que en adelante se celebren con potencias estranjeras.»

CONSULES ESTRANJEROS EN LA PENINSULA E ISLAS ADYACENTES. Despues de lo dicho en el artículo anterior, sobre cónsules españoles en el estranjero, no habria, en rigor, sino hacer aplicacion á España en órden recíproco; pues ya la práctica de las naciones es universal, y ninguna deja de estipular en los convenios y tratados las ventajas y prerogativas *de nacion mas favorecida*. Sin embargo, por respeto á lo legalmente constituido, y en todo caso como reseña jurídica, haremos ligera mencion del derecho constituido en el particular.

Incompleta, vaga y oscura era nuestra antigua legislacion, acerca de los requisitos, que habian de adornar á los cónsules estranjeros, sus exenciones, privilegios y facultades, dándose lugar por ello á discordias y conflictos de cierta clase; por cuyo motivo la Junta de comercio y dependencias de estranjeros propuso, en consulta de 30 de Julio de 1763, un reglamento sobre esta materia, que fué aprobado y adquirió el carácter y fuerza de ley, por decreto de 1.° de Febrero de 1765 (ley 6, tít. 11, lib. 6.°, Nov.).

En él se dispuso que los cónsules estranjeros, para obtener la Real aprobacion ó *regium exequatur*, habian de presentar la patente original, auténticamente traducida al español, acompañando la oportuna solicitud, y justificar que eran naturales y súbditos del Príncipe ó Estado que los nombraso; sin que les bastara tener carta ó privilegio de naturalizacion en sus dominios, ni el no hallarse domiciliados en ninguno de los de España. Tambien se dispuso que, donde hubiese necesidad de establecer cónsules, por haberse aumentado el comercio de la nacion que los nombrara, pudiesen recurrir al Monarca español, á fin de que, prévios los oportunos informes sobre la conveniencia de crear un nuevo consulado estranjero, decretase lo correspondiente.

En la citada ley se declaró tambien que los cónsules no tenian otro carácter que el de meros agentes de su nacion respectiva. Esto mismo se habia declarado repetidas veces, segun resulta de la Real órden de 7 de Febrero de 1757; por lo cual, y con motivo de haber algunos cónsules estranjeros cometido ciertos abusos de facultades, entrometiéndose á conocer en negocios de presas y otros análogos, figurando una especie de tribunal en sus casas, se mandó, por punto general, á todos los gobernadores que no permitiesen que los cónsules se propasaran en el uso de sus atribuciones, supuesto que, por su carácter consular, eran simplemente meros agentes y protectores de las personas de sus compatricios, para solicitar que se les administrase justicia. (Nota 5, dicho título y libro, Nov.)

Gozaban dichos cónsules de fuero militar, como todos los demás estranjeros transeuntes. Estaban exentos de alojamientos y de toda carga concejil y personal; pero al mismo tiempo, si comerciaban por su cuenta, por mayor ó menor, eran tratados como otro cualquiera comerciante estranjero.

Sus casas no gozaban en ningun caso de inmunidad, ni podian ostentar en ellas las armas de su nacion; estándoles permitido únicamente poner en las azoteas ó torres de su respectivo domicilio una señal convencional, para que pudiesen distinguirla sus protegidos.

No ejercian, ni aun sobre estos, ninguna jurisdiccion, estando sus facultades limitadas á componer estrajudicial y amigablemente las diferencias que surgiesen entre ellos; si bien las justicias del Reino debian prestarles el auxilio, que demandasen, para hacer efecti-

vas sus providencias estrajudiciales y arbitrarias (la citada ley).

Algunos ejercian, no obstante, en casos determinados, cierta especie de jurisdiccion; tales eran los cónsules de Inglaterra, cuando moria ab-intestato en España algun inglés transeunte. En tal caso, á consultas de la junta de dependencias y negocios estranjeros, de 6 de Marzo de 1723 y 9 de Agosto de 1724, se dispuso que podian los cónsules de la Gran Bretaña inventariar los bienes y hacienda, papeles y libros de cuentas de sus compatricios difuntos abintestato, y entregarlos para su guarda y conservacion á dos ó tres mercaderes, observándose en todo literalmente el art. 34 del tratado de la paz ajustada con Inglaterra en Utrech, sin que se pudiera estender esta facultad al caso de muerte bajo de testamento. Pero debia esto entenderse sin perjuicio de tercero, ni de la jurisdiccion y facultades de las justicias del Reino, para prevenir dicho perjuicio (ley 4, dichos tít. y lib., Nov.), á cuyo efecto, simultáneamente con los cónsules, debian nuestros jueces formar otro inventario de los bienes, relictos por muerte ab-intestato, de ingleses transeuntes, embargando al propio tiempo los caudales, papeles y libros del difunto, en los mismos mercaderes ú hombres de negocios, á quienes se los hubiesen entregado para su custodia los cónsules, y llamando por edictos á las personas que se considerasen con derecho á la herencia, ó con títulos para reclamar alguna cosa.

Tambien se dispuso por el art. 8.° del convenio de 13 de Marzo de 1769 sobre el servicio consular en España y Francia, que las herencias de los franceses transeuntes en España y de los españoles transeuntes en Francia, muertos con testamento ó ab-intestato, se liquidaran por los cónsules ó vice-cónsules, en los términos, que previenen los arts. 33 y 34 del tratado de Utrech. Sin embargo, para salvar el derecho ó los intereses de un tercero, como acreedor ó por otro título, podia la justicia militar, habiéndola, y en su defecto la ordinaria, proceder con intervencion del cónsul ó vice-cónsul, y no de otra manera, á formar el inventario, cuidar y tomar disposiciones para la conservacion de los bienes hereditarios, depositándolos en casa de uno ó más negociantes de satisfacion y conocimiento del cónsul, conforme á lo dispuesto en el art. 34 de aquel tratado.

Asimismo tenian los cónsules facultad para hacer averiguaciones sobre cualquiera clase de fondos, efectos ó bienes, que pudieran corresponder por diversos títulos á sus respectivos soberanos.

En las vacantes de los consulados no era lícito cobrar derechos; y para evitar los abusos, que en tales circunstancias se cometian, fué preciso declarar que no tenian los cónsules facultades para nombrar otros apoderados que aquellos, que juzgasen necesarios para sus negocios personales y domésticos.

Por Real órden de 28 de Setiembre de 1818, conforme con lo consultado al Consejo de Hacienda, en junta de comercio y moneda, se resolvió que no se hiciese innovacion, en cuanto á que los cónsules estranjeros no pudieran por sí y en su nombre defender á los comerciantes de sus naciones respectivas. Y posteriormente, habiendo reclamado, con notable abuso, exenciones y privilegios que no disfrutaban los naturales y súbditos de España, que obtenian nombramientos ó ejercian á nombre de otras potencias estranjeras los cargos de cónsules, vice-cónsules ó agentes consulares, por órden de la Regencia del Reino, fecha 7 de Octubre de 1842, se hizo saber al Ministerio de Hacienda, á los efectos oportunos, que en el *regium exequatur*, que se les espide por el de Estado, constan las declaraciones correspondientes sobre el particular.

Por último, con fecha 3 de Julio de 1848 se publicó un reglamento para la admision de los cónsules, vice-cónsules y agentes consulares estranjeros en los dominios de España, que conviene conocer.

Todo ello no obstante, el derecho internacional, ya particular, ya universal, ha venido sobre las prácticas aisladas y derecho privado de las naciones: se han multiplicado los tratados de comercio, paz y amistad, y los convenios consulares, y solo recorriéndolos, es como puede completarse la idea sin espo-

nerse á errar. Aun la novísima ley orgánica y y reglamento de la carrera consular, ambos de 31 de Mayo de 1870, declaran subordinadas sus disposiciones *á los tratados y al derecho público*; y véase, por tanto, el artículo **CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO**, en que todo se espone con amplitud.

CONSULES EN ULTRAMAR. Los cónsules, en nuestras posesiones de Ultramar, han revestido todos los caracteres de la institucion, desde el orígen de la misma, segun queda espuesto en el artículo **CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO**: han sido, por tanto, *propios* y *estranjeros*.

Propios. En el orígen primitivo de la institucion, eran nombrados por los Monarcas de España para los propios dominios, con el carácter principal de jueces de comercio. Formaban tribunal corporativo, compuesto de prior y cónsules, con diputados auxiliares. Conocian hasta de las quiebras: sus fallos tenian apelacion para ante el oidor, que deputase el Rey, con dos cónsules adjuntos. Tales fueron los consulados primitivos de Méjico y Lima: el de la Habana, creado en 1794, el cual constaba de *tribunal* y *junta económica* de fomento, para el de la *agricultura* y *comercio*, y compuesta de nueve consiliarios, secretario, contador y tesorero, y á la cabeza del consulado, esto es, del tribunal y de la junta, el capitan general y el intendente: el de Veracruz, creado en 1795, en un todo como el de la Habana, y respectivamente otros, aun en Filipinas. Sobre la Real cédula de su creacion, de 4 de Abril de 1794, y 17 de Enero de 1795, véase en la Recopilacion de leyes de Indias, el tít. 6.° y el 46, lib. 9.; como asimismo á Zamora, *Biblioteca de legislacion ultramarina*.

Así llegaron las cosas hasta la aplicacion del Código de comercio en aquellas regiones. Véase **TRIBUNALES DE COMERCIO**.

Cónsules estranjeros. La institucion de cónsules estranjeros en nuestras posesiones ultramarinas constituye un caso escepcional. En un principio, en aquellas posesiones españolas no podian admitirse. Era, bajo su punto de vista, una contravencion al derecho internacional; pero al derecho internacional universal; no al internacional particular, de suerte que España, no contravenia en ello á ningun tratado. Y por otra parte, el mismo derecho internacional, en su doble concepto, autoriza, que al conceder una nacion á otra el establecimiento de consulados en sus dominios, pueda negarlo respecto de puntos determinados, como se vé en todos los convenios consulares: y el derecho de gentes tambien autoriza en las naciones el de propia defensa, y el de propia conveniencia, en todo lo que no contravenga á principios de justicia y de moral universal.

Y ahora bien: España habia realizado su asombrosa conquista: tenia que asimilar á los dóciles, pero rudos conquistados, y eso sin que miras é intereses estraños, y de ordinario opuestos, contrariasen esta árdua empresa: tenia que fomentar y estender la industria sin rivalidades: tenia, en fin, que arrraigar y afianzar la seguridad del pais, que en mucho tiempo no habia de estar á prueba de embates y sugestiones. De aquí la prohibicion absoluta de cónsules estranjeros, primero; las restricciones despues.

Así, despues de recordar varias órdenes esclusivas, como la de 17 de Julio de 1803, y las de 4 de Diciembre siguiente, y 24 de Abril de 1804, establecia el Rey, por Real carta de 8 de Agosto del propio año, oido el Consejo de Indias: «Ordeno y mando á mis vireyes, presidentes y gobernadores de aquellos mis Reinos é Islas adyacentes, guarden y cumplan con la mas rigorosa exactitud las leyes y Reales resoluciones, que previenen no se admitan, en los puertos de mis dominios de las Indias, cónsules, agentes, ni representantes de las naciones estranjeras, por muy graves que sean los motivos; y que aun con respecto al comercio permitido de negros, se les obligue á que comisionen españoles de su satisfaccion, para liquidar cuentas y recaudar los intereses de aquella negociacion.....»

La accion del tiempo y los sucesos mitigaron aquel rigor y empezaron á ser admitidos cónsules; pero en localidades señaladas, y como vemos, se admitieron en Cuba y Puerto-Rico. Por cambio de notas, con los Estados Unidos de América, en 24 de Marzo de 1829,

declaraba S. M. que «persuadido de que en sus nombramientos se atenderá á su buena conducta, y sanos principios políticos, no dudará en mandarles espedir el *regium exequatur*. Pero que al mismo tiempo, en justa compensacion de todo, se prevendrá á las autoridades locales, que en el momento que adviertan, ó tengan el menor indicio de que los cónsules estranjeros promueven inquietudes, sostienen relaciones políticas sospechosas, fomentan sociedades secretas, ó de cualquier modo sean agentes, ó cooperadores de desórdenes y deslealtad, puedan los capitanes generales, aun sin formar espediente, suspenderlos en el ejercicio de sus destinos, y aun intimarles la salida y hacerles salir de la Isla; sin que por esto se consideren menoscabados los respetos y consideraciones, debidas á los Gobiernos de que proceden: *y que esta será medida general para todos los cónsules estranjeros.*»

Tal fué, y venia siendo, la condicion de los cónsules estranjeros, en aquellos dominios, con lo que se comprenderá bien la cláusula acostumbrada en los tratados de paz y comercio y convenios consulares, de que lo allí estipulado en cuanto á la admision y prerogativas de estos agentes en España y sus islas adyacentes, no se entendiese respecto á los dominios de Ultramar.

La misma disposicion se reiteraba por determinacion del Gobierno, aun en nuestros dias. Así en el reglamento, ya citado, de 3 de Julio de 1848, sobre admision de cónsules estranjeros en los dominios de España, se dispone, en cuanto á Ultramar: «En las posesiones de Ultramar, solo se admitirán cónsules estranjeros en los puntos siguientes: Puerto-Rico, San Juan; Cuba, Habana, Santiago, Matanzas, y Trinidad: Filipinas, Manila.»

Fuera de los señalados, no podrá haber mas que vice-cónsules, ó agentes nombrados por los cónsules, en sus correspondientes distritos, prévia la competente Real autorizacion (art. 2).

Supuesto que la patente consular no contenga vicios, ni motivos para ser desechada desde luego, como si el consulado no hubiere sido pedido ni concedido, ó si contiene cláusulas y facultades no acostumbradas todavia, para otorgar el *exequatur*, se recibirán informes, respecto de Ultramar, de los capitanes generales (id. 7), y de la legacion de España en la nacion que envia el cónsul, si éste no es conocido en España (id. 8).

Aun en el mejor caso, se insertará en el *exequatur* la cláusula de que este se entiende en la forma prevenida en la Real órden de 24 de Marzo de 1829, que autoriza á los capitanes generales para la suspension del mismo, y aun espulsion del cónsul por motivos de órden público y seguridad de aquellos dominios (id. 15).

Al autorizar los capitanes generales de Ultramar el nombramiento de vice-cónsul ó agentes, que nombren los cónsules, prevendrán que aquellos no son sino unos comisionados del cónsul que los nombra, y que con éste, y no con ellos, se entenderán las autoridades en asuntos oficiales, no obstante lo cual, los capitanes generales tendrán, respecto de dichos agentes subalternos, las facultades, en su caso, que respecto de los cónsules les atribuye la citada Real órden de 24 de Marzo de 1829 (id. 20).

Los capitanes generales, si en ello no encuentran inconveniente, autorizarán al nuevo cónsul para encargarse del consulado, en calidad de *simple agente comercial*, mientras recae el *exequatur* (id. 21).

Tambien podrán autorizar, con la misma calidad de *simple* agente, á la persona, que para ese efecto designe el cónsul, en caso de enfermedad, ó ausencia, ú otra autoridad superior en caso de muerte del mismo (id. 22).

Concedido el *exequatur*, se comunicará á los capitanes generales, con la patente presentada para su obtencion y las esplicaciones convenientes (id. 24 y 25).

«Los capitanes generales de Ultramar están autorizados para suspender en el empleo, y aun espulsar del territorio, sin formacion de causa, al cónsul, vice-cónsul ó agente consular estranjero que conspire contra la tranquilidad pública, ó contra los derechos de dominio y soberanía de S. M. en aquellas posesiones» (id. 41).

Tal es la práctica y el derecho constituido, en cuanto á agentes consulares estranjeros en nuestros posesiones de Ultramar; y nadie ha sostenido que España contravenia en ello á ningun derecho; ni nadie, que no pueda, ni deba continuar en la práctica del mismo, pues que, constando así que con esa condicion son admitidos, falta motivo para hacer cuestion de su espulsion, á los gobiernos que los envian, si bien es verdad que ni aun sin ella, podrian. El derecho de propia defensa es de derecho de gentes, tambien; y en cualquier caso análogo con otra nacion que España, y por tanto con ésta, podrá cuestionarse sobre lo fundado de las causas de suspension y espulsion; pero no sobre la facultad, siendo aquellas fundadas. Y la razon es tan radical, que sin un derecho constituido, como el de España, respecto de sus posesiones de Ultramar, se ha practicado, aun con ministros diplomáticos. En 1848 la España creyó tener motivo para quejarse del embajador de la Gran Bretaña, relativamente al órden público. Nosotros no juzgamos las causas; pero el Gobierno español entregó sus pasaportes á dicho ministro diplomático, y lo hizo salir de Madrid, y acompañar hasta la frontera. La España dió simultáneamente conocimiento del hecho al Gobierno británico, acompañando una memoria razonada, y protestando que, si bien se defendia, segun aprendia su derecho, nada mas léjos de su ánimo que el propósito de desconsiderar á una nacion amiga, en prueba de lo cual admitiria con justa deferencia al nuevo ministro diplomático, que tuviera á bien nombrar.

Por parte de todos se recelaba un rompimiento, que no se realizó; siendo notable que la Gran Bretaña, si bien cambió notas con España, relativas á la conveniencia de admitir de nuevo al propio ministro, no disputó la facultad radical de espulsion, dado motivo; quedando causado este precedente en el derecho internacional y en el de gentes.

Cierto que en los tratados recientes suele ya estipularse, que sus disposiciones serán aplicables y tendrán ejecucion igualmente en las posesiones españolas de Ultramar; pero *con las reservas contenidas en el régimen especial á que están sometidas dichas posesiones*, como se consignó en el art. 19 del convenio consular, celebrado con la Confederacion de la Alemania del Norte, en 22 de Febrero de 1870, y en los ajustados con otras naciones. Y como, además, en todos suelen concederse las *ventajas de la nacion mas favorecida*, lo estipulado con una sobre este punto, puede reclamarse por las restantes que se hallen en el caso. Véase el artículo **CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO**, especialmente la seccion III, en la que se hace mencion de dichos tratados.

CONSULES (**COMO JUECES DE COMERCIO**). Véase **TRIBUNALES DE COMERCIO**.

CONSULADO DE LA MAR. Con este nombre, y tambien con el de *Libro del Consulado*, es conocido el *Código de las costumbres marítimas de Barcelona*, publicado en la edad media. Es un cuerpo de derecho mercantil, que *los prohombres de Barcelona* formaron, para decidir las cuestiones que al derecho marítimo se referian.

A diferencia del derecho civil, que en cada Estado refleja los hábitos, las costumbres y las tradiciones de los pueblos, el derecho mercantil, especialmente en lo que al comercio marítimo se refiere, tiene un carácter mas general, universal si se quiere, no nacido de las necesidades de cada pueblo; sino resultado necesario de las relaciones entre los habitantes de todas las naciones, y espresion fiel de los principios de equidad que la recta razon aconseja por igual á todos los hombres.

Ningun legislador puede quebrantar estos principios, que le pondrian en contradiccion con los demás pueblos: puede, sí, proclamarlos, darles su asentimiento espreso, definirlos, y aun señalarles límites, y con su sancion soberana prescribir la solucion de las cuestiones, que acerca de ellos se susciten en el territorio, á que se estienda su autoridad; pero sin olvidar que las leyes marítimas en rigor son de derecho de gentes. Esto queria decir el Emperador Adriano, cuando, consultado en un asunto relativo á la navegacion,

contestó: *Ego quidem terræ dominus, lex autem maris*, frase que indicaba el pensamiento de que ningun pueblo determinado puede prescribir leyes en lo que por destino de la naturaleza no pertenece á nacion ó naciones determinadas, sino que es comun á todos los pueblos, sin que ninguno pueda tratar de poseerlo, ni de monopolizarlo esclusivamente, atendida su estension, y que su uso es libre para todos, por lo que, como dice elegantemente Capmany, el mar *solo puede tener una ley, mas ningun legislador*. Entiéndase que al hablar así nos limitamos á alta mar, no á la mar cerrada, sujeta á las leyes y condiciones del territorio que la rodea, ni á la mar litoral, que si bien no puede ser poseida por ningun Estado que impida su libre uso, esto no es obstáculo para que los Gobiernos, en sus respectivas zonas marítimas, hagan cuanto exijan su seguridad, su independencia, su dignidad y la salubridad pública, para libertarse de enfermedades contagiosas, ó epidémicas. Bastan aquí estas ligeras indicaciones.

No pudiendo, segun lo dicho, establecerse por ningun Estado una legislacion general que obligara á los demás, y siendo de necesidad absoluta que se adoptaran reglas comunes que dominaran en los mares, no habia mas medio que el seguir los preceptos eternos de la justicia, segun los instintos naturales de la conciencia humana, que constituyen un derecho universal respetado por todos los pueblos, á poco que haya penetrado en ellos la civilizacion. Lo que no podia hacer ningun legislador, debia suplirlo la costumbre; así fueron sucesivamente introduciéndose prácticas, hijas de la esperiencia, que con lentitud vinieron á formar un conjunto de reglas jurídicas, segun las cuales se dirimieran las cuestiones que se suscitaban en puntos que al derecho mercantil marítimo se referian. Estas reglas estaban naturalmente más al alcance de los hombres versados en la navegacion, que al de aquellos que se dedicaban al estudio de las leyes comunes: de aquí dimanaba que á los primeros, y no á éstos, acudieran para la decision de sus diferencias los que sostenian opuestas pretensiones en materias de comercio marítimo. Sustituian, por lo tanto un arbitraje de hombres conocedores de las prácticas de la mar á la jurisdiccion de los tribunales ordinarios, que no tenian la instruccion necesaria para juzgarlos. El arbitrio de buen varon ofrecia sin duda mayores garantías de acierto y de justicia, que los estudios de los conocedores del derecho escrito, ajeno casi por completo á los usos y costumbres mercantiles, y con especialidad en la parte que al comercio marítimo hacia referencia. Así se preparaba el advenimiento de las jurisdicciones especiales, encargadas de proteger y alentar el comercio, y de dirimir las cuestiones, que en materias mercantiles se suscitaran, jurisdicciones á que se dió el nombre de *consulados*. Este título, se consideraria adecuado para significar el libro en que se comprendian los usos marítimos, si bien añadiendo á la palabra *consulado*, las *de la mar*, porque solo del comercio marítimo se trataba.

Ni puede oponerse á esta presuncion la circunstancia de que, al formarse el Libro del Consulado, no hubiera todavía consulados en Barcelona ni aun en Cataluña, porque los habia en varias escalas de Levante, y esto bastaba para que se le diera la denominacion con que se le conoce. A esto se agrega que antes de la existencia del consulado de Barcelona, y antes tambien de la formacion del libro *Consulado de la mar*, el conocimiento de las cuestiones marítimas correspondia al ayuntamiento de Barcelona desde el año 1249, y que este cuerpo nombraba dos mercaderes de los de su consejo, á quienes se daba el nombre de cónsules de la mar, para que como delegados ejercieran la jurisdiccion en todo lo que concernia á los negocios marítimos.

Los que formaron el *Libro del Consulado*, no tuvieron presentes los materiales del derecho romano que se referian á la navegacion y al comercio marítimo, y de que se aprovechó el legislador de Castilla D. Alfonso X, en la obra de las Partidas; pero en cambio de esto, coincidió su conducta con la de los Emperadores romanos en buscar las reglas que debian adoptar para la formacion de su derecho marítimo, acudiendo á las prácticas de

la mar, reconocidas como mejores en sus respectivas épocas.

Antes del Imperio, atentos los romanos principalmente á estender sus conquistas terrestres, se cuidaron poco de los mares; pero cuando comprendieron que les era necesario establecer prescripciones para resolver las diferencias á que la navegacion daba orígen, aceptaron como propios los principios consignados en las famosas leyes Rodias, nombre que recibieron de la isla situada en el mar Egeo llamada Rodas, cuyos habitantes por su pericia en la mar, eran superiores sin duda en lo que á la navegacion concernia, á todos los demás pueblos, de modo que llegó á decirse de ellos que eran los dueños de los mares, frase hiperbólica, porque, segun antes dejamos indicado, ningun pueblo ni príncipe puede imperar en la mar, porque esta pertenece á todos. Y fué sin duda acertada su eleccion, porque en estas leyes se consultaba á la justicia y á la equidad, y se reflejaban las costumbres marítimas vigentes, á lo que se agregaba su precision y claridad. Su autoridad fué pronto tan grande que eran consultadas y seguidas por todos los pueblos cultos. Bastantes parecian entonces estas leyes, atendido el estado de la navegacion y las necesidades mercantiles de aquella época; pero corriendo el tiempo y acrecentadas las relaciones comerciales, habian de ser consideradas como escasas, diminutas y muy distantes de satisfacer cumplidamente á su objeto.

Adquirieron más autoridad é importancia las leyes Rodias cuando se estableció en Constantinopla la sede del Imperio, porque entonces se conoció más palpablemente la conveniencia del comercio marítimo y la necesidad de defenderse por el mar de las empresas de los enemigos del nombre romano. Dominado el Emperador Justiniano del espíritu de su época, dió á las leyes Rodias más importantes cabida en el cuerpo del derecho romano (título II, lib. XIV del Digesto.). El espíritu de esta legislacion aparece tambien en el célebre código de las Siete Partidas (título IX de la Partida 5.ª)

Pero por más mérito que se quiera dar á las leyes Rodias, y confesando que lo tienen atendidos los tiempos en que casi esclusivamente dominaban y eran las leyes á que se sujetaban los pueblos cultos, no puede desconocerse que en el siglo XII no alcanzaban á satisfacer las necesidades de la navegacion y del comercio marítimo.

El estado floreciente del comercio en Cataluña, y especialmente en Barcelona, en la última mitad del siglo XII y en la primera del XIII, el espíritu emprendedor de sus naturales, la afluencia de mercaderes estranjeros á sus costas, la fama é importancia de sus conquistas, y su union con Aragon les ponian en contacto inmediato con Egipto, con Berbería, Malta, Cerdeña y con los demás puertos importantes del Mediterráneo: podian asi ejercer el comercio con mas libertad y directamente con las demás costas del mundo entonces conocido. Esto naturalmente debia hacerles sentir mas inmediatamente la necesidad de compilar y publicar las reglas mas culminantes de derecho comercial marítimo. Así lo verificaron los prohombres del mar de Barcelona, aleccionados por la esperiencia de sus antepasados, que les enseñaron las costumbres marítimas de los principales pueblos mercantiles de Levante, convirtiendo de este modo lo que era tradicional, no estaba compilado y se encontraba esparcido, en un cuerpo de leyes, cuyas diferentes partes, armónicas entre sí, formaron un conjunto homogéneo, al alcance de todos, el cual, teniendo el carácter de ley, salvaba del olvido y del desuso las prácticas antiguas, al mismo tiempo que les daba fijeza, las ponia al alcance de todos y evitaba que fueran adulteradas, peligro que corren las costumbres legales cuando oportunamente no son coleccionadas en forma de códigos.

Nunca se ha puesto en duda que el orígen del Libro del Consulado fuese el que acabamos de manifestar. En la introduccion que se halla á su cabeza, se lee, segun la version que hace Capmany del original catalan, que nos parece exacta, como por regla general cuanto salió de su pluma: «*Estos son los buenos establecimientos y las buenas costumbres concernientes á hechos de mar, que los hombres espertos que navegan el mundo, empezaron á dar á nuestros antecesores, los cuales hicieron*

por los libros de la ciencia de las buenas costumbres. En ellas de aquí adelante se podrá hallar qué debe un patron practicar con los mercaderes, marineros, pasageros ú otra persona que vaya embarcada, y asimismo qué deben el mercader, el marino y tambien el pasajero practicar con el patron.»

A pesar de la importancia que el libro del *Consulado de la mar* ha ejercido en Europa por espacio de mas de cinco siglos, no puede fijarse de una manera positiva el año en que se formó. Participa en esto de la condicion de otros códigos españoles de mas nombradía, acerca de los cuales solo por conjeturas mas ó menos fundadas se sospecha el año ó los años en que fueron elaborados. Lo que parece mas probable es que el Libro del Consulado se redactara despues de que los antiguos reinos de Aragon, Valencia, Mallorca, y el condado de Barcelona formaran un solo Estado, y antes de la creacion de los consulados que se erigieron durante el siglo XIII en la Corona de Aragon.

Capmany, que ha tratado con particular predileccion este punto y con prolija diligencia, y cuya opinion es generalmente la seguida, se inclina á que se formó en el reinado de Don Jaime I, pero que no fué posterior al año 1266. Así rechaza de hecho las conjeturas de algunos, que dan mayor antigüedad al Libro del Consulado, entre los cuales no falta quien lo atribuya al siglo X.

Para sostener su opinion se funda Capmany en que hasta principios del siglo XIII no comenzaron los barceloneses á navegar al Levante, de cuyos paises pudieron traer las observancias y prácticas náuticas, y en que se habla en uno de los capítulos del libro *Consulado de la mar*, del papel que debia darse al escribano de la nave, siendo cierto que hasta mediado el reinado de D. Jaime no empezó el uso del papel.

Para sostener el mismo Capmany que, si bien el *Consulado de la mar* pertenece al siglo XIII, no fué posterior al año 1266, alega algunos capítulos de la misma obra, de los que colige, que cuando se compiló, los catalanes no tenian cónsules jurisdiccionales en sus mercados ó factorías, porque á haberlos tenido, á ellos, y no á los jueces ordinarios del lugar donde las naves hacian escala ó arribada, ó á los del puerto de su destino, se hubiera atribuido el conocimiento de las cuestiones entre patrones, pasajeros, mercaderes ó encomenderos, y el de los delitos de las tripulaciones. De esto deduce que no debió escribirse el Libro del Consulado despues de 1266, porque de otro modo habria hecho mencion del cónsul nacional, á quien estaban cometidas estas facultades por un diploma dado por D. Jaime en el espresado año, el cual concedia al magistrado de Barcelona la regalía de nombrar cónsules anuales en las embarcaciones que iban al viaje de Levante, los cuales, si no querian permanecer pasado el año en aquellos paises, tenian la facultad de subdelegar un teniente por todo el término que les faltara cumplir.

No obstante, el mismo Capmany, despues de las conjeturas que quedan espuestas, y que nos parecen aceptables en defecto de mejores datos, concluye reconociendo que no puede señalarse de una manera fija el año de la formacion del Libro del Consulado, porque ni en él, ni en alguna nota de los primeros editores, ni en ningun documento diplomático del reinado de D. Jaime I, hay noticia de su formacion ni de su publicacion.

Respecto al lugar en que se formó el mismo código no se puede emitir una opinion segura. Capmany se inclina, que fué redactado en Barcelona. Funda principalmente su parecer en que originariamente se escribió en idioma catalan, que era el lemosin alterado, del cual fué traducido á diferentes lenguas, y en que las monedas de que en él se hace mencion, tales como los sueldos, libras, dineros, mallas y millareses, eran de Mompeller, cuyo señorío correspondia entonces á D. Jáime.

Grande fué la fama que adquirió el Libro del Consulado en los paises donde mas florecia el comercio marítimo. Su autoridad llegó á ser general en la antigua Corona de Aragon, estendiéndose á Italia donde tenia fuerza de ley: el jurisconsulto Arnoldo Vinio dice que la mayor parte de estas leyes náuticas, que en su tiempo regian en España, Francia,

Italia é Inglaterra, estaban sacadas de él. Otros muchos jurisconsultos lo han considerado como un derecho universal, y entre ellos Mr. Valin, cuya autoridad indisputable en lo que al derecho mercantil marítimo se refiere, ha sido y es de tanto peso, dice, que despues de las leyes romanas que tomaron de las Rodias sus principales doctrinas, el Consulado de la mar era el código mas antiguo y mas famoso en materias de navegacion y comercio de los conocidos en su tiempo; que está basado en el derecho de gentes, lo que le habia grangeado la aprobacion de los demas pueblos, y que en él brilla un espíritu grande de justicia, á pesar de la forma en que está escrito. Coincide con estas apreciaciones Boulay Paty.

En un suplemento al discurso, que Capmany puso al frente del Libro del Consulado, refiere que al tiempo de concluirse la impresion del mismo discurso, habia llegado á sus manos un ejemplar del espresado código en papel recio y magnífico y caractéres semi-góticos, con todas las señales de haber sido impreso hácia fines del siglo XV: hace su descripcion, y narra la manera de haber llegado á sus manos. Atendido el espíritu crítico y el aplomo de Capmany, no puede dudarse ni de la certeza del hallazgo, ni aun de lo probable de su opinion respecto á la época en que estaba impreso, por mas que esto sea contrario á la opinion general formada antes, y con la que el mismo Capmany se habia mostrado conforme. Esta era, que la edicion mas antigua del *Libro del Consulado* era la publicada en 14 de Agosto de 1502 en Barcelona, de órden de los cónsules de la mar, corregida y coordinada por Francisco Celelles con cotejo de varios manuscritos que no existian ya, y con consejo de personas prácticas y ancianas en el arte de la navegacion y del comercio, segun consta de una advertencia preliminar del editor. Esta edicion, como manifiesta el mismo Capmany, estaba en su original catalan, llevaba el título de *Libre de Consolat dels fets maritims*, y fué reimpresa en 1592 de órden de los cónsules que gobernaban entonces la lonja de Barcelona.

El Libro del Consulado, segun las ediciones de 1502 y 1592, se componia de 296 capítulos, que no guardaban el método mas conveniente, para ser fácilmente apreciados y comprendidos, defecto que nada tiene de estraño, si se atiende á que no eran jurisconsultos, sino hombres prácticos y esperimentados en la mar los que lo redactaron. Capmany examinándolo bajo este aspecto dijo que no guardaba órden, ni division de materias, que se componia de una série interminable de capítulos, sin aquella correlacion y dependencia que facilitaria con la lectura del uno la inteligencia del otro, que todos se encontraban dislocados y desordenados sin títulos principales que los abrazaran, de manera que tratándose, por ejemplo, en un capítulo de la desercion del marinero, seguia otro que hablaba de la venta de la nave, interrumpiendo con esta dislocacion el órden distributivo de las leyes. Para subsanar estos defectos, en la hermosa edicion que hizo el mismo Capmany en 1791, por disposicion y á espensas de la Real Junta y Consulado de Barcelona y bajo la direccion de la Real y Suprema del Reino, distribuyó el Libro del Consulado por títulos que abrazaran, no solo cada uno toda una materia, sino que ellos entre sí guardaran relacion y dependencia, y dividió algunos capítulos en secciones para hacer menos desapacible y mas descansada la lectura, dando así claridad al testo, y distinguiendo en cada capítulo los párrafos que debian señalar diversidad de casos, declaraciones, restricciones ó ampliaciones. Así casi literalmente lo dice el autor, añadiendo que no alteró lo esencial de los capítulos, ni en su contesto ni en sus epígrafes, ni en la numeracion primitiva, que dejaba intacta para las citas, comprobaciones y remisiones á las ediciones antiguas.

Otra alteracion mas importante que las espuestas hizo en el método el mismo Capmany. Las primeras ediciones constaban de dos clases de capítulos: los cuarenta y cuatro primeros se referian al órden judicial y á los procedimientos forenses, y los otros doscientos cincuenta y dos contenian las costumbres del mar, en la forma que habian sido compiladas por los espertos de Barcelona, segun an-

tes queda manifestado. Capmany consideró conveniente alterar el órden, de modo que las costumbres del mar precedieron á las disposiciones relativas á la jurisdiccion y al enjuiciamiento. Bien examinado este punto, parece mas bien que Capmany hizo de la obra antigua dos obras diferentes, una que, en el tecnicismo jurídico actual, comprendia las leyes sustantivas, y la otra las adjetivas. Trató de cada una de ellas con separacion, interponiendo entre ambas una advertencia editorial, y dando á cada una su denominacion propia, para separarla hasta en esto de la otra. A la primera le dió el título de *Antiguas costumbres del mar, en las que se contienen las leyes y ordenanzas de los actos marítimos y mercantiles*; y puso á la segunda por epígrafe: *Ordenanzas de la antigua forma judiciaria del mar*. Su sistema es semejante al adoptado en el presente siglo en los países que han codificado sus leyes, los cuales han separado las sustantivas de las adjetivas, formando un código de cada clase. Seria muy probable, que si en la actualidad hiciera Capmany esta division acomodándose á la nomenclatura moderna, podria ser dijera que la primera parte de su division constituia el Código mercantil marítimo de la Edad media, y la segunda parte el Código de procedimientos, ó la ley de Enjuiciamiento mercantil en los negocios marítimos.

Los motivos que tuvo Capmany para hacer la alteracion que acabamos de mencionar, estan esplicados con claridad por el mismo escritor. Echando en cara á los editores, que dispusieron y publicaron antes el Libro del Consulado, su *impericia* y *torpeza*, dice que reunieron é insertaron bajo un mismo título general y con una misma série numérica de capítulos, cosas inconexas entre sí, de modo que el que deberia ser el capítulo I de la obra era el XLV de la série general; á lo que se agregaba la irregularidad de numerar como capítulo lo que solo es epígrafe ó introduccion del Código.

En su concepto, deberia haberse procedido comenzando por las costumbres marítimas, y despues por las leyes de jurisdiccion y procedimientos, como él lo hacia, invirtiendo el órden de las primitivas ediciones, porque el antiguo Código consuetudinario, estendido por los prácticos barceloneses, cuya antigüedad, segun él dice, no puede ser de fecha posterior á 1266, está precedido en la coordinacion y numeracion de capítulos por los estatutos del órden judiciario, establecidos mucho tiempo despues por los mareantes valencianos, y confirmados por D. Pedro III para Valencia, despues de que en 1283 creó este reino el consulado de la mar. Añade á esto Capmany la irregularidad de que un libro ordenado, publicado y reimpreso siempre en Barcelona por la autoridad del magistrado consular de esta ciudad para guia y gobierno de los juicios mercantiles, comenzara hablando de las elecciones, oficio y jurisdiccion de los cónsules de Valencia, de cuya formalidad tratan los siete primeros capítulos, inútiles entonces para el consulado de Barcelona y para los demás tribunales de esta clase, como debieron haberlo sido en todos tiempos. Corrobora además su opinion en la diferente forma de los oficios de cónsules y del juez de apelaciones en Barcelona y Valencia, puesto que en aquella ciudad eran elegidos de la clase de mercaderes, y en Valencia de entre los mareantes.

Por último, omite la edicion de Capmany los capítulos XLIII y XLIV de las Ordenanzas, fundándose en que no tienen conexion con la materia política, ni contenciosa de los consulados. En efecto, el primero de estos capítulos se referia al juramento que prestaban los abogados de Mallorca de no defender causas conocidamente injustas, lo cual sobre ser general á toda clase de juicios, no podia tener lugar en los mercantiles, en que espresamente estaban escluidos los escritos de los letrados. El capítulo XLIV trataba de los fletamentos á quintaladas procedentes de Egipto, aportados por los mercaderes de especería y droguería que no caian bajo la competencia de los cónsules, ni estaban sujetos á las formalidades de sus juicios.

No puede desconocerse que hizo Capmany un importante servicio á los estudios histórico-jurídicos del derecho, ya por su version del antiguo catalan al castellano, ya por ha-

ber facilitado el estudio de este importante Código de la Edad media, y ya por los trabajos críticos con que enriqueció la edicion de que fué encargado, y á que tan justas alabanzas han dado desde su publicacion los que se dedican al estudio del derecho mercantil marítimo.

CONSULTA, CONSULTOR, CONSULTIVO. *Consulta* es la peticion de dictámen que se hace á una persona ó corporacion competente sobre determinado asunto: *consultor*, la que, ya como particular, como el letrado, el médico, etc., ya nombrado de oficio, emite el dictámen.

Consulta al abogado, es la que suelen hacer los que se proponen entablar un litigio ó defenderlo, para instruirse acerca de la razon ó derecho que les asiste, y saber la conducta, que, judicial ó estrajudicialmente, han de seguir. En la *consulta* es necesario no omitir ninguna circunstancia, favorable ó adversa, respecto de los hechos, para que el abogado emita su parecer con exacto y cabal conocimiento de causa. Generalmente, en los asuntos ordinarios y de escasa monta, las *consultas* se suelen hacer de palabra; pero en algunos casos, cuando el negocio es árduo y complicado, se deben formular y evacuar por escrito. En Francia los abogados tienen obligacion de estenderlas en papel sellado (timbre), quedando sujetos, de lo contrario, al pago de una multa de cinco francos, segun la ley de 16 de Junio de 1824, art. 26. En España se estienden en papel comun; reintegrándolo con el del sello correspondiente, cuando, por algun motivo especial, se considera oportuno presentar en autos la *consulta*.

Llámase tambien consulta la que los jueces ordinarios de primera instancia elevan á la Audiencia de su respectivo territorio, remitiéndole original la causa, en que han dictado sentencia definitiva, ó auto de sobreseimiento, bien porque no resulten méritos contra el procesado; ó porque deba ser juzgado como reo de falta, no de delito; ó absolviéndolo de la instancia; ó imponiendo alguna pena, si el presunto reo no interpone en estos casos el recurso de apelacion, para que se revoque, anule ó reforme la sentencia (art. 51, regla 4.ª, Reglam. Provis.). La tramitacion de la *consulta* en la sala correspondiente, segun que sea de sobreseimiento, ó de sentencia condenatoria, ó de absolucion libre ó de la instancia, se halla determinada en los artículos 71, 72 y siguientes del *Reglamento provisional*.

Tambien hacen *consultas* los tribunales superiores. En efecto: cuando á las Audiencias les ocurriere alguna duda sobre interpretacion ó aplicacion de una ley, ú otra cosa que esponer, relativa á la legislacion, deben acordar sobre ello, en tribunal pleno, despues de oir á su fiscal ó fiscales; y con insercion del dictámen de estos, *consultar* á S. M. por medio del Supremo Tribunal de Justicia. En las *consultas* se insertarán tambien los votos particulares, si los hubiere, pero sin refutarlos (art. 86). El Tribunal Supremo debe dirigir á S. M., con espresion de su dictámen, las *consultas* que reciba de las Audiencias, sobre dudas de ley ú otros puntos relativos á la legislacion, y tambien *consultar* por sí mismo sobre ello y sobre lo demás que considere necesario ó conveniente para la mejor administracion de justicia (art. 90, reg. 14, id.).

En la estension, ya genérica ya específica, de la palabra, seria cosa de nunca acabar el mencionar todas sus aplicaciones. Se consulta una duda, ó lo que se ignora, conviniendo saberlo. En este artículo es consulta toda duda, que elevan á resolucion todos los cuerpos y particulares al Gobierno; los informes, en todos los órdenes, al superior. De aquí la denominacion de cuerpo *consultivo*, junta *consultiva*, etc. En otra parte hacemos mencion de la célebre *consulta del viernes*, y consultas del Consejo y de la Cámara á S. M. Véase sobre ellas el tít. 9.º, lib. 4.º, Nov.

En lo canónico se llama *consultor*, respecto de las órdenes religiosas, al que en el capítulo representaba la comunidad de su convento. Entre los franciscanos tenian antiguamente el título de *custodios, y discretos* (*custos custodum, discretius discretorum*), cuando, además de los provinciales, habia prelados religiosos, que ejercian cierta autoridad en determinado territorio, que se llamaba *custodia*, como Palestina. Los *consultores* solian

concurrir á los capítulos generales. Tambien en algunas órdenes monásticas suele haber religiosos *consultores*, á quienes los generales de las mismas acostumbran pedir dictámen sobre ciertas materias y negocios de dudosa interpretacion, viniendo á constituir una especie de consejo.

Tienen en Roma el nombre de *consultores* los teólogos, á quienes el Sumo Pontífice encarga el exámen de algunos negocios, que van á su tribunal, y los que en las congregaciones de cardenales emiten dictámen, sobre los asuntos, de que cada uno conoce respectivamente, aunque no tienen voto en ellas. Véase **CONGREGACIONES DE CARDENALES**.

Finalmente, con el mismo título de *consultores* solian ser conocidos, algunas veces, aquellos, á quienes se pedia consejo para establecer las condiciones y llevar á cabo los desafíos. Dichos *consultores*, cuando emitian dictámen, tanto sobre el derecho, como sobre el hecho, induciendo de cualquier modo á la realizacion del duelo, «quedaban ligados á excomunion y maldicion perpétua, sin que obstase privilegio alguno ó mala costumbre, aunque fuera inmemorial,» segun el Concilio de Trento, ses. XXV, cap. 19 *De reforma*.

CONSULTATIO VETERIS JURISCONSULTI. Con esta denominacion es conocida una coleccion de testos de derecho romano, formada por un autor desconocido en la época de decadencia de los estudios jurídicos. Poco importante por sí misma esta coleccion, ha sido apreciada principalmente porque contiene muchos testos de jurisconsultos antiguos, y sobre todo algunas sentencias de Paulo, á que el autor muestra gran deferencia, y algunas constituciones que no se encuentran en ninguna otra parte.

Cujacio (Cujas) imprimió esta coleccion por primera vez en 1577, y la reimprimió despues diferentes veces. Schulting la dividió en nueve capítulos, y Biener la corrigió para la obra publicada en Berlin con el título *Jus civile ante-justinianum*.

CONSULTOR DE COMERCIO. Segun el artículo 1193, del Código mercantil, en todo tribunal de comercio, habria un abogado consultor. Como se deja conocer, era asesor, en lo judicial y gubernativo. Para suplirlo, en ausencias é incompetencias, debia designarse, al principio de cada año, un número correspondiente de letrados sustitutos (Real órden de 30 de Junio de 1851). En el Real decreto de 1831, que hacia de reglamento del caso, se organiza y determina mas el cargo. La ley de 24 de Junio de 1849, estableció reglas para su recusacion y para el servicio de abogados sustitutos. Pero suprimido el fuero de comercio por la ley de unificacion de fueros, de 6 de Diciembre de 1868, quedó suprimido, como el tribunal consular, el cargo de consultor.

CONSUMACION, CONSUMADO. La primera de estas voces es técnica, hablando de la compra-venta, que se dice *consumada*, y *consumacion* del contrato, cuando este se lleva á ejecucion, y por tanto cuando se entregan recíprocamente el *precio* y la *cosa* comprada, como mas estensamente se esplica en su lugar.

Consumado se dice del matrimonio llevado á su último efecto. Véase **MATRIMONIO**.

Vienen ambas palabras de las latinas *consumatio*, y *consumatum*, con la misma significacion; la primera *completar, acabar, concluir*, la segunda cosa *acabada, completa*; y ambas del verbo *consumo*, que eso significa.

CONSUMOS (RENTA Ó CONTRIBUCION DE). No vamos á tratar del consumo, propiamente dicho, de las sustancias alimenticias, el cual, comparado en territorios determinados con relacion á su poblacion respectiva, dá la idea mas exacta del estado de prosperidad de un país, y del bienestar del pueblo que lo habita: suministra datos importantísimos al comercio para llevar á unas comarcas, donde se nota escasez, lo escedente de los mismos artículos, que se observa en otros; y previene con su detenido estudio, ó modifica por medio de las medidas previsoras, á que dá lugar, esas crísis alimenticias, comerciales y aun industriales, que con harta frecuencia y casi periódicamente vienen afligiendo á algunos pueblos. Esta cuestion, importantísima seguramente, que con tanta razon es y será por mucho tiempo objeto de la investigacion de los sábios y de los estadis-

tas, y que es por sí sola orígen de otra multitud de cuestiones sociales y de estudios puramente especulativos, no es de este lugar, ni la que nos proponemos esponer, por mas que con ella tenga alguna conexion.

Los recursos, que proporciona al Estado y á las corporaciones populares el consumo de determinados artículos, por medio del gravámen, á que se les sujeta, al llegar á manos del consumidor, el impuesto ó la contribucion de consumos, que así viene designándosela hace algun tiempo, es tan solo el punto concreto, objeto de nuestras observaciones.

De antiguo orígen es este impuesto, así en nuestro propio país, como en las principales naciones de Europa, donde se conserva, bien convencidos sus hombres de Estado, no obstante su indisputable ilustracion, de que no es posible, aunque tal vez fuera conveniente, atender á todos los gastos, que ocasiona la gobernacion de los pueblos, por medio de una sola contribucion directa; y de que es preciso acudir á los medios indirectos, para evitar mayores gravámenes, y tal vez vejaciones mas insoportables, que las que se atribuyen á este medio de percepcion. Por eso en Inglaterra el *excise*, y en Francia el *octroi*, constituyen uno de los mas pingües productos de sus rentas, y entre nosotros, á pesar de la exigüedad relativa de los ingresos del Estado, se aproximaba á 200 millones de reales lo que representaba la contribucion de consumos al decretarse su abolicion en Octubre de 1868.

Como sucede en todos los impuestos al principio de su creacion, y hasta que llegan á formar parte del sistema general rentístico de un país, el de que se trata, fué entre nosotros de escasa importancia, no solo por lo reducido de sus cuotas, sino tambien por el período determinado porque debia exigirse.

Hasta llegar á la forma y organizacion, que recibió en los últimos tiempos, puede decirse que ha pasado por las trasformaciones de diferentes impuestos, en que ha estado constituido, y que desaparecieron despues, para ser sustituidos por otros.

No obstante su remota antigüedad, es indudable que la alcabala, al establecer un tanto por ciento (dos *miajas* de maravedí) en todas las cosas que se vendieran, fijó el principio que ha servido despues de base para la contribucion de consumos, constituyendo entonces una parte de esta misma contribucion. Limitado mas tarde el derecho sobre la venta, á determinados artículos, en los impuestos conocidos con el nombre de *cientos* y *millones*, recibió en ellos una aproximacion mayor á lo que ha sido mas tarde esta contribucion.

Pero todavia, al refundirse los anteriores impuestos en el llamado de *rentas provinciales*, y al dar á este la organizacion, que obtuvo, por Real decreto de 16 de Febrero de 1824, determinando el sistema de encabezamientos, ajustes y conciertos, ó el de administracion en su caso, y permitiendo á los pueblos tener puestos públicos y ramos arrendables, aunque con limitacion á los cinco artículos de vino, vinagre, aceite, carne y jabon, recibió la contribucion de consumos la asimilacion mayor, que podia dársele, hasta que obtuvo su nombre especial, y se fijaron las bases de este impuesto por la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 1845.

Este decreto-ley, dividido en siete capítulos y ciento cincuenta y cinco artículos, es uno de los varios que se espidieron con la misma fecha, y que juntos constituyen el sistema general de impuestos, establecido en aquella época, y todavia subsistente, no obstante las alteraciones introducidas mas tarde. Determínanse en el primer capítulo las especies, que únicamente se hallan sujetas al impuesto; las cuotas que deben abonarse, segun la escala de poblacion que señala una tarifa; que sea el vendedor y no el consumidor, el que por punto general deba satisfacer los derechos; y dejando subsistentes las reglas y tarifas, que regian para la exaccion de los derechos de puertas, en los puntos donde se hallaban establecidos. El capítulo 2.° consigna las reglas y formalidades, con que debe practicarse la recaudacion, señalando para ello las que deben tener lugar en la introduccion de especies en los pueblos, en la realizacion de los depósitos y en las ventas al por menor. En el capítulo 3.°, se fijan igualmente las reglas y formalidades, á que deben sujetarse los fabricantes de aguardiente, licores,

cerveza y jabon, todo con el objeto de fomentar la renta, evitando las defraudaciones. El capítulo 4.° constituye la parte penal por la falta de cumplimiento de las disposiciones anteriores; y los restantes capítulos, al paso que esplican lo que son encabezamientos y arrendamientos de los derechos de consumos y puertas, regularizan los trámites y formas en que han de verificarse unos y otros.

Así continuó por bastante tiempo la contribucion de consumos, sin mas alteraciones que las que se señalan en la Real órden de 19 de Marzo de 1846, en que se hacen algunas prevenciones para falicitar su establecimiento y exaccion: en otra de 16 de Setiembre del mismo año, acordando algunas medidas para que el tráfico y la venta de las especies sujetas al impuesto, se verifique, sin mas trabas ni restricciones que las prescritas en el Real decreto citado de 25 de Mayo: en un Real decreto de 25 de Febrero de 1848, dictando algunas medidas referentes á la recaudacion, y otro de 31 de Diciembre de 1851, estableciendo una nueva tarifa de derechos de puertas; hasta que, realizada la revolucion política del año de 1854, se levantó en algunos puntos violenta, aunque en gran parte artificial oposicion contra ella, y por ley de 9 de Febrero de 1855, se determinó la supresion, á partir de 1.° de Enero del mismo año, de la contribucion de consumos y de los derechos de puertas, en todos los pueblos de la Península é Islas adyacentes, *en la parte que percibia el Estado.*

En esa misma ley, y con objeto de indemnizar al Tesoro del *déficit*, que debia resultar por la supresion, se autorizó al Gobierno para levantar un préstamo de 40 millones de reales efectivos, y hacer una emision de títulos del 3 por 100 consolidado, hasta la cantidad de 120 millones nominales, todo sin perjuicio de las economías, que en estos casos se acuerda siempre realizar en los gastos por servicios públicos.

Lamentable en estremo debió de ser el resultado de semejante medida, sin que produjera ninguna de las ventajas, que se habian intentado al acordarla; sin que disminuyera ninguno de los inconvenientes, que se habian procurado estirpar, cuando en la esposicion que dirigia á las Córtes aquel Gobierno, en 1.° de Octubre del mismo año de 1855, no solo se defendian calorosamente todos los impuestos indirectos y se proponia el restablecimiento de la contribucion de consumos; sino que se atacaba con igual calor la derrama establecida en sustitucion de aquella, se combatian enérgicamente las teorías, en cuya virtud habia sido decretada la supresion, y se demostraba la imposibilidad de gravar mas fuertemente la riqueza territorial é industrial, que durante aquel año y el anterior de 1854, habian contribuido con la enorme suma de mas de mil millones de reales. ¡Triste ejemplo del resultado que producen todas las convulsiones políticas en la fortuna del contribuyente, y hasta en la fortuna pública, destruyendo todos los resortes de la administracion, é inutilizándola para ejercer su accion tutelar!

A pesar de esto, la contribucion de consumos no fué restablecida, hasta el 15 de Diciembre de 1856, en que, por Real decreto de la misma fecha y en la notable esposicion, que le precede, no solo se demuestra la necesidad del restablecimiento; sino las mejoras que se introducen en la forma con que anteriormente era llevada á cabo. Consistian estas mejoras, principalmente en reducir á una sola y sujetar á una misma tarifa las dos contribuciones de consumos y puertas: en haber eliminado de las nuevas tarifas varios artículos que se hallaban gravados por las antiguas; y en la preferencia, que se daba á los encabezamientos con los pueblos sobre los arriendos de los derechos establecidos.

Tal y como quedó organizado este impuesto por el mencionado Real decreto de 15 de Diciembre, que consta de 32 artículos y las cuatro tarifas anejas, y por la detallada instruccion que para llevar á efecto su administracion y recaudacion fué dictada, con fecha 24 de Diciembre del propio año de 1856, así continuó sin alteracion notable y sin escitar reclamaciones justificadas, al menos por lo que hace al fondo de la contribucion, hasta que, ocurridos los sucesos políticos del mes de Setiembre de 1868, y habiendo servido de bandera á alguna de las juntas revoluciona-

rias, que entonces se crearon, el lema de abajo los consumos, vino el decreto del Gobierno provisional, fecha 12 de Octubre del propio año de 1868, cuyo artículo 1.° es literalmente como sigue: «Queda suprimida en »toda la Península é islas adyacentes la con»tribucion de consumos para el Tesoro, para »las provincias, y para las municipalidades. »Esta contribucion no podrá restablecerse »bajo ningun concepto por las autoridades »provinciales ó municipales, para cubrir el »déficit de su presupuesto.»

Los artículos siguientes, que son en número de 16, tienen por objeto la creacion de un nuevo impuesto de repartimiento, en sustitucion del suprimido, á que se ha dado el nombre, de *capitacion* unas veces, otras de *contribucion personal*; pero que, modificado y alterado repetidas veces desde su orígen, no solo en sus bases principales; sino en sus detalles de ejecucion, ha sido por último desechado en las Córtes, y queda fuera del sistema rentístico, que al parecer se ha creido fundar en sustitucion.

Debe añadirse que, privadas las diputaciones y ayuntamientos de los recursos, que les proporcionaba la contribucion de consumos, y mas tarde de los recargos que se les concedian sobre la contribucion territorial, los cuales se ha dispuesto que ingresen como aumento á la cuota del Tesoro, han quedado aquellas corporaciones casi del todo indotadas para atender á sus múltiples y urgentes necesidades. De aquí los graves conflictos, que han surgido con tal motivo, la necesidad que ha habido de convertir en títulos al portador las inscripciones nominativas, que poseian, produciéndoles un aumento á sus rentas, y que se han visto precisados á enajenar al bajo precio á que se han encontrado los fondos públicos, agravando así más y más su situacion con la desaparicion, puede decirse, de los últimos restos de su fortuna; y de aquí la precision de haber tenido que retroceder en el camino emprendido, concediendo á las corporaciones populares la facultad de levantar arbitrios para atender á sus apuros, aunque sea gravando las especies de consumo, y casi sin otras reglas ni cortapisas que las de la prudencia, que es de presumir no sean siempre religiosamente observadas.

En la esposicion, que precede al decreto citado de 12 de Octubre de 1868, se dice, entre otras razones, que se agrupan para anatematizar y concluir para siempre con la contribucion de consumos: «Por no haber decretado las últimas Córtes Constituyentes la supresion completa y radical, consintiendo que las contribuciones indirectas quedaran para los ayuntamientos, continuó sintiéndose el peso de sus malos efectos, y el ensayo hecho en aquella época solo dió por resultado la creacion de una nueva contribucion de consumos, que criticada por todos y reformada por algunos, han venido á concluir por el voto unánime de la Nacion.»

A pesar, pues, de ese voto unánime, á pesar de lo terminante y perentorio de la última parte del artículo, que hemos insertado á la letra, para que bajo ningun concepto puedan las autoridades provinciales y municipales restablecer el impuesto para cubrir el déficit de los presupuestos, queda aquel legal y francamente restablecido, encontrándonos en este punto precisamente en el mismo estado, aunque en mucho mas desfavorables condiciones, que cuando se dictó la ley de 9 de Febrero de 1855.

No es, sin embargo, de estos últimos tiempos, y lo mismo fuera, que dentro de nuestro propio pais, el que se trate de combatir, en nombre de la ciencia, toda especie de contribucion indirecta. A pesar de presentarse en el dia los defensores de esa idea, como mantenedores de una bandera nueva, no han faltado aguzadas plumas, en tiempos ya remotos, atendida la rapidez vertiginosa, con que marcha la sociedad en los que vamos alcanzando, que, sin tener en cuenta la respetable antigüedad, ó tal vez por eso mismo; ni la facilidad con que, en fuerza de la costumbre, se prestaban á su pago los contribuyentes, alzaran el grito de guerra contra este método de contribuir, y es porque ciertamente fijaron su atencion en los defectos, de que sin duda alguna adolece, y no se tomaron la molestia de compararlos con sus ventajas, ni de examinar, si aquellos podian remediarse sin malograr por completo su conjunto.

A fuerza de tales escitaciones, ya el Rey Don Fernando VI, espidió un decreto, fecha 10 de Octubre de 1749, espresando su deseo de mejorar el sistema de impuestos, entonces vigente, y anunciando la idea de establecer una sola contribucion en reemplazo de las varias, de que se componia la conocida con el nombre de *provinciales*; pero previendo los riesgos y la gravedad de semejante cambio, no quiso que se llevara á efecto, sin que se ejecutaran préviamente las operaciones estadísticas, que indicó en el mismo decreto, y esplanó mas minuciosamente en la instruccion con que fué acompañado, todo con el laudable objeto de poner en claro el verdadero importe de la riqueza, sobre que habia de recaer la nueva y *única contribucion*.

Puede asegurarse que jamás se han ejecutado en España trabajos de esta índole con tanta proligidad, tanta correccion, ni tanto esmero, y de ello pueden dar completo testimonio los libros de actas y consultas de la junta creada con aquel objeto, que existentes en el archivo general del Ministerio de Hacienda, ni han sido examinados muy generalmente, ni los pocos, que se han tomado ese trabajo, han podido hacerlo sin un sentimiento de admiracion y respeto hacia los que, con tanta perseverancia y tan sano criterio, sabian llevar á cabo obras de tal magnitud y tamaña importancia. Aun faltaba algo para su terminacion, cuando acaeció la muerte de aquel Monarca, á quien imitó imperturbablemente su hermano y sucesor el Sr. D. Cárlos III, quien consiguió por fin verla finalizada y ejecutado el repartimiento, espidiendo en su consecuencia el Real decreto de 4 de Julio de 1770, acompañado de una larga instruccion de la propia fecha, en virtud de los cuales se acordó la cesacion de las *rentas provinciales y sus agregadas* en las 22 provincias de Castilla y Leon, y el establecimiento de la *única contribucion*.

No obstante la singular prudencia con que se habia procedido, los numerosos antecedentes que habian llegado á reunirse, y la prevision con que se habia tratado de hacer frente á cuantos obstáculos pudieran presentarse, fueron tales y de tal magnitud las dificultades, que desde los primeros pasos se atravesaron en el camino de la reforma, que hubo por entonces de desistirse de ella, prefiriéndose la continuacion de los impuestos existentes, sin perjuicio de su modificacion, como en efecto fueron modificados quince años mas tarde, reduciéndose en gran manera el peso que ejercian las *alcabalas* y *cientos*. ¡Notable enseñanza para no proceder nunca de ligero en tan graves materias, ni esponerse á nuevos procedimientos, sin que antes se hayan ensayado debidamente en la piedra de toque de una sana esperiencia!

Tambien la Junta central y gubernativa del Reino, en nombre del Rey D. Fernando VII, que se hallaba á la sazon detenido en Francia, decretó en 11 de Agosto de 1809, la abolicion de las alcabalas, cientos y millones; aunque aplazando su realizacion para cuando se hubiesen aprobado las contribuciones, que debian establecerse en su reemplazo. Pero reunidas las Córtes en Cádiz, no aguardaron á que aquella sustitucion se realizara, y por decreto de 19 de Setiembre de 1809 declararon abolidas todas las rentas provinciales de Castilla y las equivalentes de la corona de Aragon, estableciendo en su lugar una contribucion directa, que debia pesar sobre los tres ramos de riqueza territorial, industrial y de comercio. Prescindiendo de la bondad del pensamiento, que es indisputable, á tener preparado de antemano datos exactos sobre la cuantía de dichas riquezas y la proporcion en que se halla distribuida cada una, para que pueda ejecutarse un repartimiento medianamente justificado, datos que no existian, la época en que se intentó llevarlo á cabo, no podia ser menos á propósito, aniquiladas como se hallaban las provincias por la guerra en los cinco años anteriores, exhaustas las cajas del Tesoro, y en presencia de nuevos recargos en las cargas públicas. Así es que, habiendo resultado desigualdades monstruosas, que se hacian perceptibles á la mas ligera comparacion, se elevaron quejas y reclamaciones tan repetidas y fundadas, que hubo de volverse al sistema antiguo por Real decreto de 23 de Junio de 1814.

Todavía por Real decreto de 30 de Mayo de 1817, y quebrantado, como habia quedado con tantas modificaciones y ataques tan continuados, el sistema, restablecido poco antes, se trató de nuevo de ensayar el proyecto de *única contribucion*; y áun cuando vivió algun tiempo, en medio de quejas cada vez mas acentuadas, y lo sostuvieron con teson las Córtes, que se restablecieron el año de 1820, decretando nuevas contribuciones directas, la Regencia, que tomó á su cargo el gobierno en 1823, por decreto de 9 de Junio de aquel año volvió á poner en vigor el antiguo sistema rentístico, á que se trató de dar mayor regularidad y consistencia, por medio de varias disposiciones, y especialmente por los decretros espedidos en 16 de Febrero de 1824.

En esta situacion se encontraban las rentas públicas, cuando apareció el sistema tributario de 1845, hoy vigente, y al dictarse el Real decreto de 23 de Mayo de aquel año, estableciendo el impuesto conocido con la denominacion de contribucion de consumos, que derogado, como queda dicho, en 1855, fué restablecido en 1856, y que ha vuelto á ser derogado en Octubre de 1868.

Resulta de lo espuesto, que si las contribuciones indirectas, y como tal la de consumos tiene ardientes defensores por la antigüedad, á que responde su institucion; por la facilidad con que se satisface, subdividida en porciones casi insensibles; porque se realiza el pago cuando mas conviene al contribuyente, sin plazo determinado y sin apremios de ninguna clase; y porque no es posible, en las necesidades siempre crecientes de la sociedad, acudir á un medio único de exaccion, sin que las cuotas hubieran de ser enormemente gravosas, pesaran con mayor desigualdad por falta de datos exactos para su distribucion, y vinieran á recaer casi en su totalidad sobre la clase mas maltratada, por tener siempre á la vista su riqueza; en cambio no faltan, ni han faltado nunca, adversarios terribles, que con gran copia de razones la combaten, fundándose principalmente en que es vejatoria por las pesquisas y molestias, á que da lugar; en que cuesta muy cara su recaudacion, ingresando en el Tesoro mucho menos de lo que sale del poder de los contribuyentes; en que recayendo generalmente sobre los artículos de primera necesidad, encarece la mano de obra, y pesa mas fuertemente sobre el pobre, cargado de familia, que sobre las personas acomodadas; en que entorpece el tráfico y dificulta las industrias encareciendo igualmente todos los géneros, y en que dá márgen á abusos repugnantes, fomentando la inmoralidad de todas las clases, en las unas por eludir el pago del impuesto, en las otras por aumentar ilegítimamente sus obvenciones.

Tales son las principales razones, alegadas en pro y en contra del impuesto de consumos, manteniéndose viva la lucha, hace mucho tiempo, entre los diversos contendientes. Lo peor de todo es, sin embargo, que no la constituyen ya diferencias de escuela y de principios, dentro del terreno de la ciencia, en cuyo caso no fuera imposible llegar á un acomodamiento razonable, conviniendo, si se quiere, en que es un mal la citada imposicion, como lo son otros muchos males, que se conocen en la sociedad, que son consecuencia de la sociedad misma; pero que, no pudiendo estirparlos, no pudiendo hacerlos desaparecer de raiz, hay que contemporizar con ellos, hay que modificarlos, hasta que su influencia sea lo menos perniciosa posible. Lo mejor ha sido siempre cruel enemigo de lo bueno. Lo mas lastimoso en esta delicada cuestion es que ha principiado á tomar parte en ella la pasion política, sirviendo de bandera á diversas parcialidades, y sabido es que los partidos políticos no aprenden, por punto general, lo bastante en las lecciones de la esperiencia.

No seria, pues, de estrañar que algun dia volvamos á tratar esta cuestion, mas bien que en el terreno del derecho constituyente y de la historia, como lo hemos verificado, en el del derecho constituido y como ley viva, que sujeta á su cumplimiento y respeto.

Como ilustracion al asunto, vamos á terminar presentando un estado de los productos que ha rendido, tanto al Tesoro, como á la provincia y al municipio, la contribucion de

consumos, desde el año de 1845 hasta su supresion en el de 1868, con lo cual el legislador, el contribuyente, el crítico imparcial, echarán de ver la importancia, que ha ejercido en el concurso con las demás rentas públicas.

Valores obtenidos por consumos desde 1845 á 1868.

AÑOS.	Productos para el Tesoro.	Recargos provinciales y municipales.	TOTAL. — *Reales.*
1846.....	147.688,107	39.719,533	187.407,640
1847.....	130 813,096	41.718,972	172.532,068
1848.....	144.001,406	49.243,930	193.245,336
1849.....	147.474,275	53.309,818	200.784,093
1850.....	153.878,472	59.858,388	213.736,860
1851.....	156.598,405	67.781,946	224.380,351
1852.....	162.858,568	64.210,332	227.068,900
1853.....	165.952,417	75.784,019	241.736,436
1854.....	165.461,858	75.784,019	241.245,867
1857.....	148 962,243	77.789,871	226.752,114
1858.....	154.105,047	116.572,786	270.677,833
1859.....	242.025,682	190.372,404	432.498,086
1860.....	179.142,480	122.914,956	302.057,436
1861.....	182.159,915	135.954,645	318.114,560
1862.....	183.015,779	151.104,039	334.119,818
1.er semestre de 63.	87.571,723	73.409,567	160.981,290
1863 á 64.	178.854,106	146.906,281	325.760,387
1864 á 65.	184.922,572	142.048,274	326.970,846
1865 á 66.	185.824,838	167.242,351	353.067,192
1866 á 67.	189.583,540	170.062,518	360.208,726
1867 á 68.	191.403,690	172.263,321	363.667,011

Abolidos los consumos, de que tanta participacion alcanzaba á los ayuntamientos, estrechados estos hasta el último estremo por las circunstancias difíciles, y prestando la escentralizacion un eficaz desahogo al Gobierno central, descargándole, y al presupuesto general, de las atenciones perentorias y exigencias abrumadoras del municipio, se acordó la omnímoda administracion municipal, y los ayuntamientos, trasformando la contribucion suprimida en arbitrio municipal, la impusieron en sus distritos en este concepto, y pugnan, aunque con dificultad, por acreditarla: es decir que despues de abolida, está vigente, variando solo la forma.

CONTABILIDAD EN HACIENDA. Espresa en abstracto, lo que *cuenta*, en concreto, significando aquí la cuenta y razon de los tributos y rentas del Estado. Juzga á la *administracion*; pero no ha de confundirse con ella. La administracion, por ejemplo, de una mina del Estado, de una salina, de un portazgo, podrá producir poco ó mucho, segun esté montada, y mejor ó peor servida: la contabilidad se hará cargo del producto: depurará lo que este sea menor por desfalco, ó distraccion; pero el que tales ramos debieran producir más, incumbe á la administracion, que debe plantear y hacer realizar medios adecuados.

Por lo dicho se inferirá, que al hablar de la contabilidad, no vamos á dar una esplicacion especial de los multiplicados cargos, y clases de funcionarios que la constituyen, lo cual corresponde á sus artículos respectivos. Tampoco, por la propia razon, de cada una de las rentas, é ingresos del erario; sino de los resortes principales de esta vasta atencion, de sus garantías, y de las leyes y disposiciones por que se rije; empezando en la provincia y terminando en el Tribunal de Cuentas del Reino. Una cosa, sí, notaremos, y es que nuestras leyes y Reales disposiciones suelen tratar conjuntamente de la administracion y de la contabilidad, y así tenemos que citarlas, reservando al criterio de cada uno el diferenciar, segun el principio arriba sentado.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Ley de administracion y contabilidad de la Hacienda pública, de 20 de Febrero de 1850.

Ley de 25 de Agosto de 1851, dando nueva organizacion al Tribunal de Cuentas.

Ley provisional de administracion y contabilidad de Hacienda, de 25 de Junio de 1870.

Ley provisional de organizacion del Tribunal de Cuentas del Reino, de 25 de Junio de 1870.

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE 20 DE FEBRERO DE 1850 (1).

«Art. 1.° (Reproducido en el art. 1.° de la ley de contabilidad de 25 de Junio de 1870.)

(1) Varios artículos de esta ley han sido trasladados literalmente á la de contabilidad de 25 de Junio de 1870, que se inserta tambien en el lugar correspondiente de esta misma seccion, por lo que, para evitar repeticiones, los suprimimos aquí, si bien haciendo las oportunas referencias en sus lugares respectivos. Otros artículos han sido reproducidos; pero con algunas modificaciones: los que se hallan en este caso se insertan íntegros en una y otra ley, para que pueda hacerse el estudio comparado de las mismas.

»Art. 2.° (Este párrafo, como el 1.° del art. 2.° de dicha ley.)

Estarán tambien sujetos á prestacion de fianzas aquellos, de quienes lo exije la seguridad de los fondos, segun los reglamentos.

Aun cuando la administracion de las rentas, impuestos ó derechos, que en el dia están á cargo de otros Ministerios, por corresponder á servicios especiales, continúe bajo su direccion por ahora, se declara que los empleados de los mismos Ministerios, que tengan á su cargo la recaudacion, dependerán inmediatamente del de Hacienda en todo lo relativo á la entrega y aplicacion de dichos fondos y á la rendicion de sus respectivas cuentas.

»Art. 3.° (Como el párr. 1.° del art. 4.° de id.)

Por consiguiente, se prohibe la existencia de fondos particulares independientes de la direccion del Tesoro público.

»Art. 4.° No se concederán exenciones, perdones ni rebajas de las contribuciones ó impuestos públicos; sino en los casos y en la forma que las leyes hubieren determinado.

Arts. 5.° y 6.° (Disponian lo mismo que el 6.° y 7.° de dicha ley de 1870.)

Art. 7.° (Como el 8.° de id.)

»Art. 8.° Los procedimientos para la cobranza de créditos definitivamente liquidados á favor de la Hacienda pública, serán puramente administrativos, no pudiendo hacerse estos asuntos contenciosos, mientras no se realice el pago ó la consignacion de lo liquidado en las cajas del Tesoro público.

Art. 9.° (Es el 16 de la ley de 1870.)

»Art. 10. Tambien corresponderán al órden administrativo la venta y administracion de bienes nacionales y fincas del Estado. Las contiendas, que sobre incidencias de subastas ó de arrendamientos de bienes nacionales, ocurrieren entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventilarán ante los Consejos provinciales y el Consejo Real en su caso respectivo, si no hubieren podido terminarse gubernativamente con mútuo asentimiento. (El párrafo 2.° como el 2.° del artículo 15 de id.)

»Art. 11. Los procedimientos para el reintegro de la Hacienda pública en los casos de alcances, malversacion de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea su naturaleza, serán administrativos y se seguirán por la vía de apremio, mientras solo se dirijan contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y contra los fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones contraidas en las fianzas, ya por su intervencion oficial en las diligencias y aprobacion de estas, ó ya por razon de actos administrativos, que hubieren ejercido como funcionarios públicos. (El párrafo 2.° es el art. 11 de id.)

Arts. 12, 13 y 14. (Como el 12, 13 y 14 de idem.)

»Art. 15. La Hacienda pública tendrá derecho al interés anual de un 6 por 100 sobre el importe de los fondos distraidos de su legítima aplicacion, á contar desde el dia en que esta debió realizarse hasta el en que se verifique el reintegro, sin perjuicio de las penas en que hayan incurrido los empleados responsables.

»Art. 16. Cuando para el cobro de un crédito se presentase un documento falso, no será pagado por el Tesoro, y el que lo hubiese presentado será entregado á los tribunales. Si posteriormente acudiese á cobrar el mismo individuo ú otro con el documento legítimo, obtendrá el pago del Tesoro, mediante las formalidades, que se dictarán por el Gobierno para evitar abusos.

Arts. 17, 18 y 19. (Como el 18, 19 y 23 de la ley de 1870.)

Art. 20. (Como el párr. 1.° del 24 de id.)

Art. 21. (Es el 25 de id.)

»Art. 22. El presupuesto no se considerará vigente, sino durante el año, á que corresponda, debiendo anularse los créditos de que en él no se hubiere hecho uso, á no ser que la ley haya autorizado su permanencia. Para terminar, no obstante, las operaciones de cobranza de los haberes de la Hacienda pública, y de liquidacion y pago de obligaciones por servicios hechos en un año, el presupuesto de este se conservará abierto hasta fin de Junio del año inmediato siguiente. Los haberes que queden sin cobrar y las obligaciones no pagadas al cerrarse en aquella fecha el presupuesto, se comprenderán como resultas del anterior en el del año corriente, por capítulos adicionales y con la debida distincion de servicios.

»Art. 23. De los créditos sobre el Tesoro, concedidos en el presupuesto á cada Ministerio, hará éste uso para pagar los servicios determinados á cada capítulo, sin que pueda aplicarse el sobrante de uno á los servicios de otro capítulo distinto. Dentro de un mismo capítulo podrá no obstante aplicarse por cada Ministerio el crédito sobrante de un artículo, por reducciones ú otras causas, á otro ú otros artículos que lo hubieren menester.

»Art. 24. Para cada mes se aprobará en Consejo de Ministros una distribucion de fondos por capítulos de los presupuestos de todos los Ministerios, con sujecion á la cual satisfará el Tesoro á cada uno de ellos las cantidades que se les hubiesen designado.

Para hacer la distribucion de fondos de cada mes se tendrá presente la inversion de la cantidad recibida en el mes anterior por cada uno de los Ministerios, de que estos deberán respectivamente dar razon.

»Art. 25. En los pedidos que se hagan por los Ministerios al Tesoro público de las cantidades comprendidas en la distribucion de que trata el artículo anterior, se espresará necesariamente, como requisito indispensable para su pago, el ca-

pítulo del presupuesto, á que respectivamente se hayan de aplicar con arreglo á la misma distribucion.

»Art. 26. El Tesoro público situará los fondos necesarios para satisfacer las obligaciones de los diferentes Ministerios en los puntos mismos, en que estas existan, ó á la mayor inmediacion posible á ellos, haciéndose con este fin por el Tesoro las convenientes traslaciones de caudales.

»Art. 27. En el caso de ocurrir gastos urgentes y de imprescindible necesidad, á juicio y bajo la responsabilidad del Gobierno, que no se hallen comprendidos en los presupuestos, el Rey, por medio de un Real decreto, concederá al Ministerio en que deban hacerse un suplemento de crédito, si los gastos de que se trata corresponden á servicios comprendidos en el presupuesto; y no estándolo, un crédito estraordinario de la cantidad que fuere necesaria. En ambos casos éstos créditos se considerarán provisionales, hasta que sean aprobados por una ley, para lo cual se presentará en la legislatura mas próxima el correspondiente proyecto con los documentos, que justifiquen aquella medida.

»Art. 28. Los Reales decretos, concediendo suplementos de crédito ó créditos estraordinarios, serán espedidos por el Rey en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros, sin cuya circunstancia no podrán ser ejecutados por el Ministerio de Hacienda.

Estos decretos, así como la ley de presupuestos, se comunicarán al Tribunal de Cuentas.

»Art. 29. (Es el 45 de dicha ley de 1870.)

»Art. 30. La cuenta general del Estado, se dividirá en los ramos siguientes:

1.° De las rentas públicas.
2.° De los gastos públicos.
3.° Del Tesoro público.
4.° De presupuestos.
5.° De la deuda pública.
6.° De fincas del Estado.

»Art. 31. De cada uno de dichos ramos presentará anualmente el Ministerio de Hacienda á las Córtes una cuenta general impresa.

»Art. 32. La cuenta general de las rentas públicas se dividirá en dos partes: la primera contendrá las operaciones respectivas á cada cuenta definitiva, correspondiente al último presupuesto cerrado, y la segunda las operaciones pertenecientes á la cuenta provisional del presupuesto que se conserva abierto. Una y otra contendrán con la debida distincion los derechos que por cada contribucion, renta ó ramo hayan correspondido en el año de que se trata á la Hacienda pública, las cantidades cobradas y las pendientes de cobranza. Como parte de esta cuenta se acompañarán á ella, aunque con separacion, las particulares de efectos estancados ú otros, que formen rentas especiales ó produzcan ingresos en el Tesoro público.

»Art. 33. La cuenta general de los gastos públicos se dividirá igualmente en las dos partes, de cuenta definitiva del presupuesto cerrado y la provisional del pendiente de operaciones, señalando en cada una de ellas los derechos liquidados de los acreedores del Tesoro, las cantidades pagadas y las que resulten sin satisfacer.

La clasificacion de estos créditos se hará por capítulos del presupuesto de cada Ministerio.

»Art. 34. La cuenta general del Tesoro público contendrá las operaciones de éste en el ingreso y movimiento de fondos, operaciones de crédito, y sus resultados en pró ó en contra.

»Art. 35. La cuenta general de presupuestos consistirá en la comparacion, por cada una de las rentas públicas, de los ingresos calculados en el presupuesto, con el importe de los derechos liquidados de la Hacienda pública, y el de lo cobrado, y á la misma comparacion por capítulos y por artículos del presupuesto entre los gastos en él señalados y los que resulten por servicios hechos y liquidados ó por otras obligaciones legítimamente contraidas, y lo que por ellos se haya pagado.

Art. 36. La cuenta general de la Deuda pública se dividirá en cuatro ramos.

1.° Liquidacion.
2.° Conversion.
3.° Amortizacion.
4.° Intereses.

La cuenta de liquidacion presentará el número, clase é importe en reales vellon de los créditos existentes y presentados á liquidacion; el número, clase é importe de los reconocidos y liquidados, y el de los que quedan por liquidar y reconocer.

La de conversion comprenderá el número, clase é importe de los créditos reconocidos y convertidos á otras categorías existentes ó creadas nuevamente, y el resultado que ésta conversion produzca de disminucion en las clases convertidas y aumento de aquellas á que se han reducido estas.

La de amortizacion presentará con la debida especificacion el número, clase é importe en reales vellon de todos los créditos existentes y reconocidos, antiguos y convertidos; el número, clase é importe de los amortizados, espresando las causas y efectos de la amortizacion, y la cantidad de deuda existente para el año siguiente.

La de intereses comprenderá el importe de estos en el período que abrace la cuenta, el importe de los satisfechos y de los dejados de satisfacer, y los saldos que arrojasen, con la misma distincion.

Por el resultado de estas cuatro cuentas se formará la general de la direccion de la deuda pública en efectos y metálico, presentando la suma de cantidades, que por todos conceptos hubieren ingresado en las arcas, la inversion y el saldo que apareciere.

»Art. 37. La cuenta de fincas del Estado se dividirá en tres ramos:

1.° Número y valor de las fincas del Estado, por tasacion y por capitalizacion, existentes al entrar en el período que la cuenta comprenda, con distincion de rústicas, urbanas, censos y foros, y con especificacion de sus procedencias, número y valor de las enagenadas en el mismo período, con igual distincion, número y valor de las que queden por enagenar.

2.° Importe, á que hayan ascendido en venta las fincas enagenadas, con especificacion de años, en que se hubiese verificado la enagenacion en metálico y papel de la deuda del Estado, importe de lo percibido, con la misma distincion, en el período que abrace la cuenta, especificándose tambien lo que proceda de plazos anticipados, y resto, que hubiere quedado pendiente de cobro, en efectivo ó documentos de deuda, con igual distincion de plazos vencidos y plazos por vencer.

3.° Importe del producto en arrendamiento ú otra clase de aprovechamientos, que hubieren tenido las fincas nacionales durante el período de la cuenta.

»Art. 38. Las cuentas particulares, que deben llevar y rendir los diferentes jefes y empleados de la administracion pública, se clasificarán y ordenarán de modo que su reunion produzca las generales, que quedan señaladas, y con ellas puedan estas comprobarse por medio de simples sumas y restas.

»Art. 39. Las contabilidades centrales de los Ministerios, que administran fondos públicos, á escepcion de la de Hacienda, llevarán las cuentas de administracion de los ramos productivos, con separacion de las que sean respectivas á liquidacion de haberes y pagos de servicios.

»Art. 40. Los empleados de todos los Ministerios, que administren y recauden fondos del Estado, rendirán mensual y anualmente cuenta justificada de su importe á la Contaduría general del Reino, la cual, despues del competente exámen ó comprobacion, las pasará al Tribunal de Cuentas. En los ramos administrados por otros Ministerios que el de Hacienda, remitirán de las suyas dichos empleados copias autorizadas á las contabilidades centrales de los mismos Ministerios de que dependan.

Las cuentas de distribucion ó pagos en otros Ministerios que el de Hacienda, se reunirán en sus respectivas oficinas centrales de contabilidad, las cuales, despues del competente exámen y comprobacion, las pasarán al Tribunal de Cuentas, remitiendo mensual y anualmente copias autorizadas á la Contaduría general del Reino.

»Art. 41. A las cuentas generales definitivas, que han de presentarse á las Córtes, acompañarán certificaciones del Tribunal de Cuentas de hallarse conformes con las particulares, sometidas á su exámen, notando las diferencias, si las hubiere.

»Art. 42. A las cuentas, de que tratan los artículos anteriores, acompañará siempre el proyecto de ley para la aprobacion definitiva de ellas.

»Art. 43. Las operaciones de la direccion de la deuda pública estarán bajo la inspeccion de una comision permanente, compuesta de tres individuos de cada uno de los Cuerpos Colegisladores, quienes, haciendo el reconocimiento y exámen de los libros y cajas de aquella dependencia, siempre que lo estimen conveniente, presentarán anualmente á las Córtes su informe proponiendo las mejoras de que sea susceptible su organizacion.

Esta comision se nombrará en cada legislatura luego que esta se haya constituido, y continuará en el ejercicio de su encargo hasta que sea relevada por la del año siguiente, aun cuando estén suspensas las Córtes ó se haya disuelto el Congreso de los Diputados.

Art. 44. (Como el 75 de la ley de 1870.)

»Art. 45. De las cuentas, que en consecuencia de los presupuestos de ingresos y gastos provinciales y municipales, se hubiesen formado, al tenor de las leyes y reglamentos vigentes, se redactará anualmente y se presentará á las Córtes por el Ministerio de la Gobernacion:

1.° Un estado impreso de los ingresos y gastos de los presupuestos provinciales.

2.° Un estado impreso de los ingresos y gastos de los presupuestos municipales.

»Art. 46. Estos estados contendrán el importe de las rentas, derechos, recargos y arbitrios provinciales y municipales, y la inversion de aquellos fondos en los gastos de la administracion provincial y municipal.»

LEY DE 25 DE AGOSTO DE 1851, DANDO NUEVA ORGANIZACION AL TRIBUNAL DE CUENTAS (1).

«Artículo 1.° El Tribunal de Cuentas ejercerá privativamente la autoridad superior para el exámen, aprobacion y fenecimiento de las cuentas de administracion, recaudacion y distribucion de los fondos, rentas y pertenencias del Estado; así como tambien de las relativas al manejo de fondos provinciales y municipales, cuyos presupuestos requieran la Real aprobacion....

»Art. 16. Compete al Tribunal de Cuentas como autoridad privativa superior:

1.° Requerir la presentacion de todas las cuentas que deban someterse á su calificacion en la forma y épocas prescritas por las leyes, regla-

(1) Téngase por reproducida la *nota* de la ley anterior, pues tambien varios artículos de la presente, que interesan en esta materia, han sido trasladados sin alteracion, y otros con algunas modificaciones, á la ley del propio Tribunal de Cuentas de 25 de Junio de 1870, que se inserta más adelante en esta misma seccion.

mentos é instrucciones, compeliendo á los morosos en presentarlas por los medios que se establecen en esta ley.

2.° Examinar las cuentas sometidas á su calificacion; exigir de quien corresponda los documentos que estas requieran; poner los reparos que cada cuenta ofrezca, oyendo las contestaciones de los interesados, y proveer el fallo que haya lugar en la forma y por los trámites que esta ley establece.

3.° Hacer efectivos los alcances que resulten de los fallos de calificacion de las cuentas por los correspondientes medios de apremio.

4.° Vigilar en la forma que esta ley establece sobre los jefes encargados de la cobranza de los alcances de empleados, descubiertos antes de las cuentas, conociendo además de los recursos que, prévia la consignacion del pago del desfalco, interpusieren los alcanzados contra las providencias de dichos jefes acerca de los mismos alcances.

5.° Declarar la absolucion de responsabilidad y cancelacion de sus obligaciones en favor de los que tengan fianzas presentadas para el manejo de caudales pertenecientes al Estado ó á los fondos provinciales y municipales, de que trata el art. 1.°

6.° Conocer en la forma que se determine por reglamento de los recursos de apelacion, que de los fallos de los Consejos provinciales interpusieren los depositarios de Ayuntamientos y los administradores de fondos de beneficencia que resulten alcanzados en sus cuentas respectivas, con arreglo á lo prescrito en el art. 109 de la ley de 8 de Enero de 1845 y en las demás disposiciones vigentes.

7.° Examinar y comprobar las cuentas peculiares de los Ministerios y las generales del de Hacienda, y declarar su conformidad ó las diferencias que ofrecieren, cotejadas con los resultados de las cuentas particulares presentadas al Tribunal, y con las disposiciones del presupuesto correspondiente.

Se determinará por reglamento la época en que ha de hacerse la comprobacion de las cuentas ministeriales, segun la que para presentarlas al Tribunal se fija por la ley de contabilidad.

8.° Hacer las observaciones y promover las reformas á que dieren lugar los abusos advertidos en la recaudacion y distribucion de los fondos públicos, y los vicios notados en la contabilidad por resultado del exámen anual de las cuentas....

Art. 17. (Reproducido en el art. 17 de la ley del propio Tribunal de 25 de Junio de 1870.)

Art. 18. (Los cuatro primeros párrafos como en el art. 18 de dicha ley.)

»5.° La propuesta al Gobierno de la destitucion del mismo.

»Art. 19. La jurisdiccion del Tribunal en el exámen y juicio de las cuentas alcanza á todos los que por ellas resulten responsables como recaudadores, liquidadores, ordenadores, interventores y pagadores, ó por cualquiera otra gestion en el manejo de los fondos públicos; pero no se estiende á los actos de los Ministros de la Corona, entendiéndose esta limitacion sin perjuicio del exámen que corresponda al Tribunal, en virtud y para los efectos de lo dispuesto en los párrafos 7.° y 8.° del art. 16 de esta ley.

No serán por lo tanto responsables de la legalidad de un pago los que le hubieran ordenado y ejecutado con autorizacion prévia ó aprobacion posterior de dichos Ministros.

»Art. 20. El conocimiento de los delitos de falsificacion ó de malversacion, y cualesquiera otros que puedan cometerse por los empleados en el manejo de los fondos públicos, corresponde á los tribunales competentes, á quienes el de Cuentas remitirá el tanto de culpa que aparezca, cuando en las cuentas hallare indicios de aquellos delitos, dirigiéndole por medio del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio del procedimiento que corresponda para el reintegro de los descubiertos.

»Art. 21. Los espedientes sobre cobranza de alcances y descubiertos serán de la competencia privativa del Tribunal de Cuentas, siguiéndose ante el mismo por sus delegados hasta su terminacion y efectivo reintegro de dichos alcances. Pero si en estos procedimientos se suscitaren tercerías de dominio ó de prelacion de créditos, se reservará su conocimiento á los tribunales de justicia á quienes corresponda.

Tambien tocará á estos mismos tribunales el conocimiento de las contiendas sobre legitimidad de las escrituras de fianza, sobre la calidad de herederos de los responsables, y en general sobre todas las cuestiones que puedan suscitarse en los espedientes de alcances ó de cuentas en que haya de hacerse la declaracion de un derecho civil. (Los dos últimos párrafos como los mismos del artículo 21 de la ley citada.)

Arts. 22 y 23. (Como los mismos artículos de dicha ley.)

»Art. 24. Serán funciones peculiares del Ministerio fiscal: (Las siete primeras como las mismas de igual artículo de la citada ley.)

8.° Evacuar los informes que se le pidan por el Gobierno, arreglarse á las instrucciones que por el mismo puedan comunicársele, y dirigirle las consultas que crea convenientes en todo lo relativo al ejercicio de su ministerio.

»Art. 27. El Tribunal de Cuentas despachará en pleno y dividido en dos salas.

»Art. 28. El Tribunal en pleno ejercerá las atribuciones contenidas en los párrafos 1.°, 7.° 8.° y 9.° del art. 16 de esta ley; y dividido en salas, desempeñará las espresadas en los párrafos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del mismo artículo.

Art. 29. Para que el Tribunal en pleno pueda preparar el informe anual á que se refiere el pár-

rafo 8.° del art. 16, las salas estarán obligadas á remitir á secretaría, segun vayan fallando sobre las cuentas, una copia autorizada de los cargos relativos á pagos no conformes con el presupuesto, aunque se hubiesen autorizado por disposicion del Gobierno.

»Art. 30. La primera sala se compondrá de cuatro ministros, y de tres la segunda, asignándose á cada una un letrado.

Cuando no asista el presidente del Tribunal, presidirá la sala el más antiguo de los ministros.

En cada sala hará de secretario el subalterno del Tribunal que designe el reglamento.

»Art. 31. Las decisiones de la sala se adoptarán por mayoría de votos.

Para los fallos definitivos se requieren tres votos conformes á lo ménos, y no reuniéndose esta conformidad en la sala que conociere del negocio, asistirán para resolverlo ministros de otra sala por el órden de su antigüedad, empezando por el más moderno.

»Art. 32. Para el exámen de las cuentas y preparacion del juicio ante las salas se distribuirán los contadores y demás subalternos del Tribunal en secciones, cada una de las cuales estará á cargo de uno de los siete ministros.

Las secciones se dividirán en mesas á cargo de un contador con uno ó más auxiliares á sus órdenes.

»Art. 33. Las cuentas que hayan de presentarse al Tribunal se dirigirán á la secretaría, y el presidente, despues de registradas, las pasará á las secciones respectivas.

El ministro de cada seccion encargará su exámen al contador á quien corresponda, ayudado de uno ó más auxiliares.

»Art. 34. El órden de la distribucion de los trabajos se fijará al principio de cada año por el Tribunal pleno, procurándose evitar en lo posible que un mismo contador examine en años consecutivos las cuentas de un mismo responsable.

El exámen de las cuentas se hará precisamente en el local destinado al efecto por el Tribunal, sin que en ningun caso puedan estraerse de él.

»Art. 35. El Contador encargado del exámen de una cuenta, reconocerá y comprobará todas sus partidas con los documentos que las justifiquen, y estará obligado á estender al pié de ella su censura, la cual habrá de recaer sobre los puntos siguientes:

1.° Si la cuenta está formada con sujecion á los modelos é instrucciones del ramo á que pertenece, y si sus partidas aparecen justificadas con el resultado de la cuenta anterior y con los documentos correspondientes.

2.° Si los documentos justificativos son auténticos y legítimos, hallándose conformes con las leyes, reglamentos ú órdenes á que deben ajustarse.

3.° Si contiene la cuenta alguna omision en las partidas de cargo.

4.° Si la aplicacion que resulta haberse dado á los fondos á que se refiere, está conforme con los artículos del presupuesto, y si en caso contrario, se halla autorizada por Real decreto ú órden especial.

5.° Si las liquidaciones y demás operaciones aritméticas de la cuenta están hechas con exactitud.

Con referencia á estos puntos, concluirá en su censura el contador, ya sea opinando por la aprobacion de la cuenta, si la hallase arreglada, ó ya formulando los reparos que deban ponerse á ella.

Si hubiese hallado defectos sustanciales en la forma de la cuenta, propondrá, ante todas cosas, que se mande reformar.

Arts. 36, 37 y 38. (Son el 35, 36 y 37 de la ley de 1870.)

Art. 39. (Como el párrafo 1.° del art. 38 de idem.)

Arts. 40 á 46 inclusive. (Reproducidos en los artículos 39 á 45 de id.)

Art. 47. (El párrafo 1.° es el art. 46 de id.)

»Este recurso deberá interponerse dentro de cinco dias, cuando el interesado hubiere comparecido ante el Tribunal por sí ó por apoderado, y en otro caso en el de treinta dias.

Art. 48. (Es el 47 de la citada ley.)

»Art. 49. Para la actuacion de los recursos de que hablan los dos artículos precedentes, en lo que no está previsto por esta ley, se observará lo prevenido respecto de los mismos recursos en el reglamento de 30 de Diciembre de 1846 sobre el modo de proceder el Consejo Real en los negocios contenciosos de la Administracion.

»Art. 50. Además de dichos recursos se podrá interponer el de casacion, cuando en la decision ejecutoriada hubiere infraccion manifiesta de disposiciones legales, ó cuando en la tramitacion del juicio se hubiesen violado las formas sustanciales de la actuacion establecida por esta ley.

Art. 51. (Como el 50 de la ley de 1870.)

»Art. 52. La sala mandará remitir inmediatamente el espediente al Consejo Real, á fin de que conozca de dicho recurso, consultando al Rey por la vía contenciosa la decision que corresponda, y cuidará al propio tiempo de dar conocimiento á las partes del dia en que esta remision se verifique.

»Art. 53. Para la sustanciacion de este recurso observará el Consejo Real lo prevenido en su Reglamento respecto del de revision de sus providencias.

»Art. 54. Si el Rey, oido el Consejo Real, declarase la nulidad de un fallo del Tribunal de Cuentas por haberse violado las formas sustanciales de la actuacion, la cuenta objeto del fallo será de nuevo examinada y juzgada por otra sec-

cion y sala del mismo Tribunal de Cuentas, subsanándose ante todas cosas los vicios del anterior procedimiento.

Pero si la nulidad procediese de que en la decision hubiere infraccion manifiesta de disposiciones legales, será juzgada la cuenta por el Consejo Real, asistiendo únicamente los consejeros ordinarios.

»Art. 55. Siempre que se declare no haber lugar al recurso de casacion, se condenará al recurrente en los gastos causados por dicho recurso y en la pérdida de la cantidad depositada, con aplicacion al Erario público.

Arts. 56 á 60 inclusive. (Como los arts. 54 á 58 de la ley de 1870.)

»Art. 61. Para hacer efectivos los alcances que resulten de las cuentas, la sala respectiva del Tribunal abrirá espediente, encabezándole con certificacion del cargo ó descubierto, y delegando sus facultades en la autoridad administrativa de quien sea subalterno el alcanzado, la cual procederá por la vía de apremio contra las fianzas y bienes de éste y contra los demás que como fiadores, como testigos de abono ó como jefes del alcanzado, puedan tener responsabilidad subsidiaria, guardando el órden correspondiente y procediendo con arreglo á las leyes administrativas y órdenes de la materia. Cuando á juicio del Tribunal fuere conveniente, se hará la delegacion espresada en la autoridad administrativa del territorio donde radiquen las fincas hipotecadas en la fianza del alcanzado.

»Art. 62. La sala vigilará sobre el curso de estos espedientes, y exigirá que la autoridad delegada la dé partes periódicos de su estado; removerá con sus providencias los entorpecimientos que ocurriesen, y cuidará de que se le remita en tiempo oportuno el documento formal que justifique el reintegro del alcance. Este documento deberá espresar circunstanciadamente la forma y las especies en que el reintegro se haya verificado.

»Art. 63. En los procedimientos de cobranza y responsabilidad de desfalcos causados por empleados, y averiguados antes de las cuentas ó fuera de ellas, los respectivos jefes del alcanzado estarán sujetos á la jurisdiccion y vigilancia del Tribunal, debiendo darle parte sin demora de la formacion de todo espediente de esta naturaleza, y proceder en ellos como en los de alcance, al tenor de lo prevenido en los arts. 61 y 62.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la accion administrativa, que directamente corresponde á la autoridad del Gobierno sobre dichos jefes.

»Art. 64. De las providencias definitivas que dicten los jefes delegados, así en los espedientes de alcance como en los de desfalco, podrán los interesados responsables apelar para ante el Tribunal, interponiendo recurso dentro de los cinco dias siguientes al en que se les hubiere hecho saber.

Art. 65. No serán apelables, sin embargo, aquellas providencias en que el delegado ejecute simplemente preceptos determinados del Tribunal; pero de éstos podrá suplicarse dentro de diez dias, siempre que se trate de providencias ó declaraciones de responsabilidad independiente de la discusion de las cuentas ó no comprendidas en éstas. La súplica se interpondrá ante la misma sala originaria, debiendo pasar el incidente á la otra para su decision.

»Art. 66. Los recursos espresados en los dos artículos anteriores sólo suspenderán la ejecucion pendiente cuando los que los interpongan consignen el importe del descubierto por que se proceda, en el Banco español de San Fernando, ó en cualquier otro establecimiento autorizado al intento, ó cuando al admitirlos acordase la sala del Tribunal la suspension por estimar segura la fianza, ó por otros motivos especiales.

»Art. 67. Los delegados remitirán al Tribunal copia íntegra de la parte del espediente que tenga relacion con el incidente que hubiere motivado la apelacion.

»Art. 68. En las instancias de apelacion ó de súplica de que tratan los artículos 64 y 65, se declarará conclusa la actuacion con un escrito por cada parte; y si se ofreciere prueba, cuando no la hubiese, la sala señalará para practicarla el término que estime prudente; pasado el cual se dictará la resolucion que proceda.

Este término no podrá esceder de treinta dias para la Península y de cuarenta y cinco para las islas adyacentes.

Art. 69. (Es el 66 de la ley de 1870.)

»*Disposiciones transitorias.* Art. 70. Desde la publicacion de la presente ley se considerarán como administrativos todos los espedientes judiciales sobre alcances y desfalcos, que se hallen pendientes en las subdelegaciones de Rentas ó en el Tribunal mayor de Cuentas.

Los primeros se pasarán desde luego á los gobernadores de provincia, y los segundos á las salas del nuevo Tribunal para su continuacion en la forma que esta ley prescribe.

Esceptúanse de esta regla los que se hallen pendientes de decision sobre incidencias, que por ser de derecho civil corresponden al conocimiento de los tribunales de justicia, al tenor de lo declarado en el art. 21 de esta ley. El curso del apremio en estos espedientes se suspenderá ó se continuará, segun lo prescribe el mismo artículo.

»Art. 71. Las causas criminales que sobre los delitos espresados en el art. 20 existan en el Tribunal mayor de Cuentas, se remitirán á la Audiencia del territorio donde tenga su domicilio el responsable, ó á que pertenezcan los juzgados de Rentas que las hubieren sustanciado en primera instancia; y las que pendan ante estos juzga-

dos, se consultarán y remitirán en su tiempo y caso á la Audiencia respectiva.

»Art. 72. Las cuentas de atrasos hoy pendientes se examinarán y fallarán con arreglo á esta ley, en cuanto les sea aplicable, y para su despacho sucesivo se distribuirán por el Tribunal entre las secciones y las salas del mismo encargadas de las cuentas corrientes.

»Art. 73. El Gobierno publicará los reglamentos para desenvolver convenientemente las disposiciones de la presente ley, oyendo préviamente al Consejo Real, así para formularlos, como cuando estime conveniente modificarlos despues de publicados.»

LEY PROVISIONAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE HACIENDA, DE 25 DE JUNIO DE 1870.

CAPÍTULO I.—*De la Hacienda pública.*

«Art. 1.° Constituyen la Hacienda pública todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos que pertenecen al Estado. Sus rendimientos, que forman el haber del Tesoro, se aplican al pago de las obligaciones del Estado.

»Art. 2.° La recaudacion del haber del Tesoro estará á cargo del Ministerio de Hacienda, y se efectuará por agentes del mismo, responsables y sujetos á la rendicion de cuentas.

Los empleados de los diferentes Ministerios, que tengan á su cargo la administracion de algunas rentas, impuestos ó derechos, que por razon de su especialidad no puedan administrarse por el de Hacienda, dependerán de este en todo lo relativo á la entrega y aplicacion de los fondos y á la rendicion de sus respectivas cuentas.

»Art. 3.° Estarán sujetos á la prestacion de fianza en metálico ó efectos públicos de la Deuda con interés, aquellos funcionarios, de quienes las instrucciones lo exijan para la seguridad de los fondos ó efectos que manejen ó custodien.

»Art. 4.° La suma de los caudales públicos, inclusos los reintegros de pagos indebidos, y el producto en venta de los efectos, que se enajenen por inútiles ó innecesarios en todos los ramos del servicio del Estado, se reunirán en el Tesoro ó sus dependencias, ingresando en sus arcas material ó virtualmente.

Se prohibe la existencia de cajas particulares, aunque solo contengan fondos destinados y aplicados ya á un ramo especial, á no ser que, por conveniencia del servicio, se creyera necesaria la existencia de alguna de estas cajas, en cuyo caso deberá establecerse con conocimiento y consentimiento del Ministerio de Hacienda, y su custodia quedará á cargo de claveros é interventores responsables, en la forma que determine un reglamento especial.

»Art. 5.° No se concederán exenciones, perdones ni rebajas de las contribuciones ó impuestos públicos, ni moratorias para el pago de débitos al Tesoro, sino en los casos y en la forma que las leyes hubieren determinado.

»Art. 6.° No podrán enajenarse ni hipotecarse los derechos de la Hacienda pública, cualquiera que sea su naturaleza, sino en virtud de una ley; y tampoco podrán arrendarse las rentas públicas, fuera de los casos en que se halle espresamente autorizado por las leyes de su creacion ó por otra ley especial.

»Art. 7.° Para someter á juicio de árbitros las contiendas, que se susciten sobre los derechos de la Hacienda, habrá de preceder una ley autorizándolo.

»Art 8.° En las negociaciones y comisiones del Tesoro y en todo contrato de ejecucion material para atender á algun servicio público, se prohibe, bajo pena de nulidad, toda estipulacion ó cláusula, que esplícita ó implícitamente suprima ó altere las formalidades establecidas para justificar el cargo y descargo de las personas responsables del legítimo empleo de los fondos públicos. Cualquiera que sea la clase y condicion de los que por comision espresa ó por servicios accidentales tengan parte en aquellas operaciones, aun cuando no fueren empleados públicos, quedarán por este solo hecho sujetos en la rendicion de sus cuentas á las reglas de justificacion establecidas por los reglamentos é instrucciones para cada caso.

»Art. 9.° Los procedimientos, así para la cobranza de contribuciones, como para la de las demás rentas públicas y créditos definitivamente liquidados á favor de la Hacienda, serán meramente administrativos, y se ejecutarán por los agentes de la administracion, en la forma que las leyes y reglamentos fiscales determinen. Las certificaciones de los débitos de aquella procedencia, que espidan los interventores y jefes de los ramos respectivos, tendrán la misma fuerza ejecutiva para proceder contra los bienes y derechos de los deudores, que la sentencia judicial. No podrán hacerse estos asuntos contenciosos mientras no se realice el pago ó la consignacion de lo liquidado en las cajas del Tesoro público.

»Art. 10. Los procedimientos para el reintegro de la Hacienda pública en los casos de alcances, malversacion de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea su naturaleza, serán administrativos y se seguirán por la vía de apremio, mientras solo se dirijan contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y contra los fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones contraidas en las fianzas, ya por su intervencion oficial en las diligencias y aprobacion de estas, ó ya por razon de actos administrativos, que hubieren ejercido como funcionarios públicos, sin que obste, para la continuacion de los indicados procedimientos en dicha vía, la jurisdiccion de los tribunales competentes para conocer y fallar sobre las causas cri-

minales que por aquellos delitos se formaren, de cuya decision deberá darse conocimiento á los jefes de los alcanzados ó malversadores.

»Art. 11. Cuando contra los procedimientos administrativos, á que se refiere el artículo anterior, se opusieren demandas por terceras personas que ninguna responsabilidad tengan para con la Hacienda pública por obligacion ó gestion propia ó trasmitida, el incidente se ventilará por trámites de justicia ante los tribunales competentes.

»Art. 12. En el procedimiento por apremio, de que habla el art. 9.°, se aplicará ante todas cosas al reintegro de la Hacienda pública la fianza, que tuviera prestada el empleado responsable.

Si esta fianza fuere insuficiente, se perseguirán en seguida los bienes muebles ó inmuebles de la pertenencia del mismo.

Si estos no alcanzaren á cubrir el desfalco, y el valor efectivo de las fincas hipotecadas no hubiere llegado al que se les atribuyó en la fianza, se dirigirá el apremio, solo por la diferencia que resulte entre ambos valores, contra los testigos de abono y los funcionarios aprobantes de la fianza, no persiguiéndose á estos hasta despues que se hayan agotado los medios de reintegro contra aquellos.

Cuando todavía quedare por cubrir el alcance, en todo ó en parte, despues de las gestiones precedentes, se dirigirá el apremio contra los jefes ó empleados, á quienes con arreglo á las instrucciones de cada ramo deba exigirse la responsabilidad subsidiaria.

»Art. 13. La Hacienda pública por sus créditos liquidados tiene derecho de prelacion en concurrencia con otros acreedores, sin otras escepciones que las siguientes:

1.° Los acreedores, que lo sean por título de dominio ó de hipoteca especial, con relacion á las fincas comprendidas en la fianza, que prestó el deudor á favor de la Hacienda, siempre que aquel título no haya caducado legítimamente y sea de fecha anterior á la del otorgamiento de dicha fianza.

2.° Los que tengan la misma accion de dominio ó de hipoteca especial sobre los bienes del deudor, no comprendidos en la fianza, siempre que el título de aquella accion esté vigente; pero quedando á salvo el derecho de la Hacienda contra toda enajenacion ó hipoteca de los bienes del deudor, si resultare ó pudiere probarse haber sido simuladas ó haberse hecho en fraude de las acciones del fisco.

3.° Las mujeres por su dote entregada y revestida de todas las solemnidades prescritas por el derecho comun, escluyéndose la dote simplemente confesada, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento.

»Art. 14. Los procedimientos para la cobranza de créditos por alcances, cuando estos hayan sido descubiertos por los jefes de los empleados, serán dispuestos por los mismos jefes con aprobacion de la autoridad superior económica de la provincia.

Los empleados, sin embargo, verificado que sea el pago ó la consignacion de la cantidad demandada, podrán reclamar contra la providencia de los jefes ante el Tribunal de Cuentas.

»Art. 15. Tambien corresponderán al órden administrativo la venta y administracion de bienes desamortizados y propiedades del Estado. Las contiendas que sobre incidencias de subastas ó de arrendamientos de los mismos bienes ocurran entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventilarán ante las corporaciones y con sujecion á los trámites que dispongan las leyes ó instrucciones que regulan estos servicios.

Las cuestiones sobre dominio ó propiedad, cuando lleguen al estado de contenciosas, pasarán á los tribunales de justicia, á quienes corresponda.

»Art. 16. Ningun tribunal podrá despachar mandamiento de ejecucion, ni dictar providencias de embargo, contra las rentas ó caudales del Estado.

Los que fueren competentes para conocer sobre reclamacion de créditos á cargo de la Hacienda pública y en favor de particulares, dictarán sus fallos declaratorios del derecho de las partes, y podrán mandar que se cumplan cuando hubieren causado ejecutoria; pero este cumplimiento tocará exclusivamente á los agentes de la Administracion, quienes, con autorizacion del Gobierno, acordarán y verificarán el pago en la forma y dentro de los límites, que señalen las leyes de presupuestos y las reglas establecidas para el de las obligaciones del Estado.

»Art. 17. La Hacienda pública tiene derecho al interés anual de un 6 por 100 sobre el importe total de los alcances, malversacion y desfalcos de sus fondos, á contar desde el dia en que se le irrogue el perjuicio hasta el en que se verifique el reintegro. Pero cuando, por la insolvencia del deudor directo, se exija el pago á los responsables subsidiarios, solamente se les cargarán dichos intereses desde el dia en que, declarada su responsabilidad, se les requiera al pago, hasta el en que realicen el reintegro. La obligacion al pago de los intereses no eximirá á los responsables de las penas en que hayan incurrido.

»Art. 18. Ninguna reclamacion contra el Estado, á título de daños y perjuicios ó á título de equidad, será admitida gubernativamente, pasado un año desde el hecho en que se funde el reclamante, quedando á este únicamente el recurso que corresponda ante los tribunales competentes, al que habrá lugar como si la reclamacion hubiera sido denegada por el Gobierno. Este recurso prescribirá por el trascurso de dos años, á contar desde la misma fecha.

»Art. 19. Todo crédito, cuyo reconocimiento y liquidacion no se haya solicitado con la presentacion de sus documentos justificativos, dentro de los cinco años siguientes á la conclusion del servicio de que proceda, quedará prescrito. No será aplicable esta disposicion á los créditos, cuyo reconocimiento y liquidacion haya dejado de verificarse por causas independientes de los interesados, siempre que estos justifiquen haber presentado en tiempo oportuno sus reclamaciones y los documentos en que las hayan fundado.

Con este fin todo acreedor podrá exigir de la oficina á que corresponda un recibo espresivo de la reclamacion y documentos presentados y de la fecha y número de su inscripcion en el registro de la misma oficina.

No se entiende abierto ni rehabilitado por este artículo ningun plazo que estuviere cerrado ó fenecido á virtud de disposiciones anteriores.

»Art. 20. Las operaciones de la Direccion de la Deuda pública estarán bajo la inspeccion de una comision permanente, compuesta de tres individuos de cada uno de los Cuerpos colegisladores, quienes, haciendo el reconocimiento y exámen de los libros y cajas de aquella dependencia, siempre que lo estimen conveniente, presentarán á las Córtes anualmente su informe proponiendo las mejoras de que sea susceptible su organizacion.

Esta comision se nombrará en cada legislatura, luego que esta se haya constituido, y continuará en el ejercicio de su cargo, hasta que sea relevada por la del año siguiente, aun cuando estén suspensas las Córtes ó se haya disuelto el Congreso de los Diputados.

»Art. 21. El Ministro que acuerde resolucion contraria á cualquiera de las prohibiciones de este capítulo, ó á las reglas en él dispuestas, para que no se menoscaben los intereses públicos, quedará sujeto á la responsabilidad, que señala el Código penal á los defraudadores de intereses públicos.

»Art. 22. Los jefes y empleados públicos, que administrando las contribuciones, rentas, valores, propiedades y derechos que constituyen el haber de la Hacienda ó del Tesoro, faltaran á las órdenes, instrucciones, reglamentos ó leyes de su respectivo ramo, ó causaran perjuicios á la Hacienda por comision ú omision, serán responsables de su importe, y quedarán obligados á su resarcimiento, y á las penas, en que hayan incurrido, si hubiere mediado delito.

CAPÍTULO II.—*De las obligaciones del Estado y de los presupuestos.*

»Art. 23. Son únicamente obligaciones exigibles del Estado las que se comprenden en la ley anual de presupuestos, ó se reconocen como tales por leyes especiales.

»Art. 24. Cada Ministerio formará el presupuesto anual de todos los gastos de su servicio, y lo pasará al de Hacienda, por el cual se redactará y presentará á las Córtes el presupuesto general de gastos del Estado, sometiendo al mismo tiempo á su deliberacion el de ingresos, ó sea la propuesta de medios con que cubrir todas las obligaciones. Esta propuesta acompañará siempre á todo proyecto de ley que lleve consigo autorizacion de gastos.

Los presupuestos generales de ingresos y gastos se presentarán á las Córtes antes del dia 11 del mes de Febrero, ó sea cuatro meses y 18 dias antes de aquel en que haya de empezar su ejercicio.

»Art. 25. El presupuesto de cada Ministerio solo comprenderá los gastos de su servicio, clasificados por capítulos, cada uno de los cuales contendrá las atenciones de una misma especie, subdivididas en el número de artículos necesarios para la determinacion de los pormenores.

»Art. 26. En el presupuesto de ingresos se espresará el importe calculado de cada uno de los recursos de la Hacienda: el de gastos comprenderá todas las obligaciones, cuyo cumplimiento exija el empleo de alguna cantidad.

»Art. 27. Los presupuestos se dividirán en ordinarios y extraordinarios: en los ordinarios se incluirán los recursos y los gastos, que tengan carácter permanente, aunque su cuantía sea variable; en los extraordinarios se detallarán los recursos y obligaciones de carácter transitorio.

»Art. 28. En los presupuestos de ingresos figurará, en partida separada, cada contribucion, impuesto ó renta; y tambien el producto de las fincas, valores y derechos pertenecientes al Estado,

»Art. 29. El presupuesto ordinario de gastos tendrá dos partes: se comprenderán en la primera las obligaciones generales del Estado, y en la segunda las propias de los diferentes Ministerios.

Una y otra se dividirán en secciones, y estas en capítulos y artículos.

»Art. 30. No podrán incluirse en una seccion obligaciones correspondientes á distintos Ministerios, ni en un capítulo diversos servicios, ni tampoco los gastos del personal y material del mismo servicio.

»Art. 31. Las Córtes discutirán y votarán, por conceptos en los ingresos y por capítulos en los gastos, todas las alteraciones que el Gobierno proponga, con relacion á los presupuestos del año anterior: las demás partidas se entenderán aprobadas.

»Art. 32. Si reunidas las Córtes en el tiempo señalado por la Constitucion, dejasen de votar ó autorizar algun año la ley de presupuestos para el siguiente, se considerará vigente la inmediata anterior. Se exceptúa el caso, en que se determine otra cosa por una ley especial.

»Art. 33. El Gobierno no puede suprimir, ni modificar los recursos votados por el Parlamento, ni crear otros nuevos, á no estar autorizados por la ley de presupuestos ú otra especial.

Tampoco podrá dar otro empleo á los fondos públicos, que el prescrito en la ley de presupuestos ú otra que lo determine.

»Art. 34. Los Ministros, que ordenen exacciones, no autorizadas por la ley, incurrirán en las penas, señaladas en el Código penal á los que cometen defraudacion atribuyéndose poder y facultades que no tienen.

Los que faltaren á la ley en la aplicacion y distribucion de los fondos públicos, quedarán sujetos á las penas, prescritas por el mismo Código para los que distraen de su objeto dinero, efectos ó cualquiera otra cosa recibida en depósito ó administracion.

»Art. 35. Los presupuestos regirán durante un año; pero quedarán abiertos en los seis meses siguientes, para la liquidacion y ejecucion de los cobros y pagos pendientes al finalizar dicho año.

»Art. 36. Para cada mes se aprobará en Consejo de Ministros una distribucion de fondos, por capítulos de los presupuestos de todos los Ministerios, con sujecion á la cual la ordenacion de pagos dispondrá el abono de las obligaciones del Estado.

Art. 37. Las distribuciones mensuales de fondos se redactarán en el Ministerio de Hacienda por los pedidos que le harán los demás Ministerios, atendiendo á la importancia de las obligaciones propias de cada capítulo del presupuesto, que hayan de satisfacerse en los meses respectivos.

»Art. 38. En la ley de cada presupuesto se fijará el importe ó la cantidad, á que podrá ascender, durante el año á que corresponda el mismo, la Deuda flotante del Tesoro. Dentro del límite, determinado para esta clase de deuda, podrá el Ministro de Hacienda adquirir sumas á préstamo, ó verificar cualquiera operacion de crédito sin necesidad de otra autorizacion.

En los demás casos será indispensable se le autorice por una ley.

»Art. 39. El Gobierno pasará al Tribunal de Cuentas del Reino, para su exámen y toma de razon, todos los contratos, que celebre con el fin de adquirir fondos, bien sea en concepto de préstamo ó anticipo, bien negociando valores ó efectos públicos. A los contratos originales se acompañarán los espedientes, que los hayan producido, debiendo entregarse en el Tribunal, dentro de los 30 dias siguientes al de la celebracion del contrato. Se dará tambien cuenta al Tribunal de las órdenes, que aprueben ó autoricen operaciones del Tesoro para entretenimiento ó renovacion de la Deuda flotante.

Si en alguno de los referidos contratos ú operaciones se hubiesen cometido ilegalidades ó cualquiera clase de abusos ó faltas, á juicio del Tribunal, este dará inmediatamente cuenta á las Córtes por medio de una memoria estraordinaria.

»Art. 40. Cuando ocurra la necesidad de hacer algun gasto, para el cual no haya crédito legislativo, ó sea insuficiente la suma señalada en el presupuesto para atender á un servicio, el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley, pidiendo en el primer caso un crédito estraordinario, y en el segundo un suplemento de crédito, y proponiendo en ambos los medios de obtener los fondos necesarios para cubrir las obligaciones, que aquellos créditos representen.

»Art. 41. Si las Córtes no estuvieran reunidas y el gasto para el cual falte crédito fuera urgente, el Gobierno podrá, bajo su responsabilidad, acordarlo, observando estas formalidades.

Cuando resulten sobrantes de crédito en otros capítulos de la seccion, á que corresponda el gasto, podrá hacerse trasferencia de crédito del capítulo ó capítulos, que ofrezcan remanente, al capítulo ó á los capítulos en que exista el déficit. Estas trasferencias se acordarán por el Consejo de Ministros, oyendo préviamente á la seccion de Hacienda del Consejo de Estado.

Cuando no hubiere sobrante en la misma seccion del presupuesto, el Consejo de Ministros acordará la concesion de suplemento de crédito, ó crédito estraordinario, oyendo préviamente al Consejo de Estado en pleno sobre la necesidad y urgencia del gasto, cuyo importe se cubrirá provisionalmente con la deuda flotante del Tesoro, si las rentas ó recursos eventuales del Estado no hubiesen proporcionado valores, superiores á los presupuestos, en cantidad equivalente ó superior á la que representen los nuevos créditos.

»Art. 42. Los decretos de concesion de créditos estraordinarios ó de suplementos de crédito se remitirán con los espedientes que los hayan producido al Tribunal de Cuentas para su registro, y despues se publicarán en la *Gaceta de Madrid*. El Gobierno incurrirá en responsabilidad, conforme al artículo 34, si los ejecuta sin cumplir estos requisitos.

»Art. 43. El Gobierno presentará al Congreso de los Diputados, dentro precisamente del primer mes de cada reunion de Córtes, un proyecto de ley de aprobacion de los créditos estraordinarios y suplementos de crédito, acordados durante la época de suspension de sesiones, y de los medios necesarios para obtener los recursos equivalentes.

»Art. 44. En el mismo plazo de un mes el Tribunal de Cuentas presentará al Congreso una memoria dando razon de los créditos estraordinarios y suplementos de crédito que haya registrado, y emitiendo su juicio sobre la legalidad de cada uno de ellos.

»Art. 45. Serán responsables al reintegro de todo esceso de pago, que hubiere hecho el Tesoro público, los fefes administrativos y funcionarios de cualquiera clase que lo hubieren ocasionado al liquidar créditos ó haberes, ó al espedir documentos en virtud de las funciones que les estén encomendadas, sin perjuicio de las penas á que haya lugar si resultase culpabilidad.

CAP. III.—*De los balances que deben acompañar al proyecto de ley de presupuestos.*

»Art. 46. Con el proyecto de ley de presupuestos presentará el Gobierno un balance que ponga de manifiesto la situacion del anterior al terminar el año de su período natural, y la del Tesoro público en la misma fecha.

»Art. 47. El balance á que se refiere el artículo anterior comprenderá:

1.° El importe calculado en la ley del presupuesto por cada uno de los conceptos generales de ingreso; lo que por cuenta de los mismos se haya recaudado; las sumas pendientes de cobro; el total de los valores probables del presupuesto, y las diferencias que produzca la comparacion de estos con los créditos legislativos.

2.° La cantidad consignada en cada seccion del presupuesto de gastos para atender á los servicios públicos; lo satisfecho por cuenta de estos créditos durante el año; las sumas pendientes de pago; las obligaciones probables del presupuesto, y las diferencias que resulten de su comparacion con los créditos autorizados.

3.° Un estado de la deuda flotante del Tesoro, que detallará con distincion de valor y clase los efectos que hubiera en circulacion al empezar el año; los emitidos durante él; los recogidos en el mismo período; los que resultasen en circulacion al finalizar el año; la cantidad satisfecha durante el mismo período por intereses y quebrantos de las operaciones sobre dicha clase de deuda, y el tanto por 100, término medio, á que haya costado su entretenimiento en la época á que se refiera el balance.

4.° Un estado de la cartera del Tesoro, espresivo del importe y vencimiento de los efectos ó valores á favor de la Hacienda pública que hubiera al comenzar el año á que corresponda; los adquiridos durante él; los realizados ó cedidos en el mismo período, y los que á su terminacion resulten pendientes de cobro.

5.° Los inventarios de todo el material que posea el Estado, con espresion de las alteraciones que hubiese sufrido durante el año y las existencias que resulten para el siguiente.

6.° El de fincas y derechos reales del Estado, que espresará los que posea al principio del año, los que haya adquirido y enajenado con posterioridad, y los que resulten existentes en el fin del mismo período.

CAP. IV.—*De la ordenacion de los gastos del Estado, y de los pagos que para cubrirlos realice el Tesoro.*

»Art. 48. Cada Ministro ordenará ó dispondrá los gastos propios de los servicios correspondientes al departamento de su respectivo cargo, con arreglo á las disposiciones de la presente ley. Esta facultad podrá delegarse por los Ministros en los directores y demás agentes de la administracion pública, en los términos que establezcan los reglamentos.

»Art. 49. El Ministro de Hacienda dispondrá todos los pagos que hayan de hacerse por las cajas públicas. A este fin se confiere al director general del Tesoro el carácter de ordenador general de pagos del Estado, cuyo cargo desempeñará por delegacion del Ministro de Hacienda.

Con el objeto de facilitar el servicio público, habrá los ordenadores secundarios que se consideren necesarios.

Todos los ordenadores secundarios de pagos serán subalternos del general del Estado. Su nombramiento y renovacion corresponde al Ministro de Hacienda.

Se esceptuan los ordenadores de los ramos de Guerra y Marina, los cuales serán nombrados por estos Ministerios. Dependerán, sin embargo, directamente del Ministro de Hacienda, y por consiguiente del ordenador general de pagos del Estado.

»Art. 50. El personal de las ordenaciones de pagos de los Ministerios se nombrará por el Ministro de Hacienda, á propuesta fundada del ordenador general de pagos del Estado.

Se esceptuan las ordenaciones de Guerra y Marina, cuyo personal se nombrará por aquellos Ministerios con sujecion á los escalafones y reglamentos de los cuerpos administrativos del ejército y de la armada.

»Art. 51. Los ordenadores de pagos serán responsables de todos los indebidamente dispuestos, á no ser que el Ministro de Hacienda los ordene, despues de esponerle aquellos por escrito su improcedencia y las razones en que esta pueda fundarse.

CAP. V.—*De la intervencion.*

»Art. 52. Se confiere al director general de Contabilidad el carácter de interventor general de la administracion del Estado. La direccion de Contabilidad fiscalizará todos los actos de la administracion pública que produzcan ingresos ó gastos; intervendrá la ordenacion y ejecucion de los ingresos y pagos, y llevará toda la contabilidad del Estado.

»Art. 53. La intervencion general ejercerá sus funciones por medio de agentes directos ó delegados, establecidos cerca de todas las depen-

dencias encargadas de los diferentes ramos de la administracion pública y de la ordenacion general ó secundaria de los pagos.

»Art. 54. Todos los agentes interventores directos serán nombrados por el Ministro de Hacienda á propuesta de la intervencion general. En los mismos términos se hará el nombramiento y remocion de todo el personal de las intervenciones; pero en cuanto á las de las ordenaciones, dependencias y establecimientos de Guerra y Marina, se observarán las reglas establecidas en los artículos 49 y 50 respecto á las ordenaciones secundarias de pagos de los mismos Ministerios.

»Art. 55. La intervencion general del Estado queda facultada para inspeccionar por sí ó por medio de delegados todas las dependencias y establecimientos de Guerra y Marina, en cuanto se refiera á los servicios que produzcan liquidacion y pagos de obligaciones.

»Art. 56. Los interventores serán responsables mancomunadamente con los administradores, ordenadores de pagos y jefes de establecimientos, de todos los actos ilegales de estos, referentes á la liquidacion de derechos y obligaciones de la Hacienda y del Tesoro, y á los pagos que realicen las cajas, siempre que los consientan sin hacer observacion escrita acerca de su improcedencia ó ilegalidad.

CAP. VI.—*De las cuentas del Estado.*

»Art. 57. De todas las contribuciones, rentas fincas, valores y derechos, cuyos rendimientos constituyen el haber de la Hacienda; la distribucion é inversion que de este se haga, y de las operaciones que realice el Tesoro, se rendirán cuentas al Tribunal de las del Reino, por conducto de la intervencion general del Estado, en los plazos, en la forma y por los períodos que determinen las instrucciones ó reglamentos.

»Art. 58. Las cuentas á que se refiere el artículo anterior, se darán por los empleados que tengan á su cargo la administracion ó manejo de las contribuciones, rentas, propiedades, valores y efectos, y serán intervenidas por agentes directos de la intervencion general del Estado. Estas cuentas parciales se dispondrán de modo que por sus resultados puedan formarse las generales, que ha de presentar el Gobierno á las Córtes.

»Art. 59. El primer exámen y reparo de las cuentas parciales y su fallo corresponde á la intervencion general del Estado, cuya dependencia las pasará al Tribunal ordenadas y clasificadas, despues de hechas aquellas operaciones, en los plazos que los reglamentos establezcan.

»Art. 60. Corresponde además á la intervencion general perseguir los descubiertos que encuentre en el exámen de las cuentas parciales, y tambien los alcances que el Tribunal declare al revisarlas y fallarlas definitivamente, ó que se descubran fuera del exámen de las cuentas. Pero no se darán por terminados los espedientes que al efecto se sigan, sin consulta prévia con el mismo Tribunal.

»Art. 61. En el término de dos años y medio, contados desde el fin del ejercicio de cada presupuesto, el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados la cuenta definitiva correspondiente al mismo, con un proyecto de ley para su aprobacion.

»Art. 62. La cuenta definitiva correspondiente á cada presupuesto constará de dos partes.

La primera se referirá á los ingresos, y espresará, con la misma clasificacion de conceptos de la ley del presupuesto respectivo, los ingresos calculados en ella; los que se hayan recaudado durante el período natural y el de ampliacion del ejercicio del presupuesto; lo que habiendo quedado sin cobrar por cuenta de derechos liquidados á favor de la Hacienda pública, pase en concepto de *resultas* á la cuenta del año siguiente; y por último, la comparacion entre los ingresos presupuestos y los realizados.

La segunda parte se contraerá á los gastos, y detallará, por el mismo órden y clasificacion de capítulos que el presupuesto, los créditos concedidos para cada servicio, tanto por la ley, cuanto por otras disposiciones en concepto de supletorios ó estraordinarios; los pagos hechos á cuenta de los mismos créditos; las obligaciones reconocidas y que por no haberse satisfecho deban pasar como *resultas* á la cuenta del presupuesto siguiente; y por último, la comparacion de los gastos presupuestos con los pagos realizados.

Despues se resumirán por secciones, así en ingresos como en gastos, los resultados generales de la recaudacion y distribucion de los fondos públicos, y se presentará como última consecuencia el déficit ó sobrante que resulte.

»Art. 63. Acompañará á la cuenta general un estado demostrativo de las alteraciones que en la ejecucion de la ley del presupuesto hubiesen sufrido los créditos consignados en ella por efecto de los créditos estraordinarios y suplementos de crédito, acordados con arreglo á lo prescrito en el capítulo 2.° de esta ley. A este estado se unirá copia de las leyes y documentos que hayan modificado los créditos primitivos.

»Art. 64. Serán parte integrante de la cuenta de cada presupuesto otras dos generales de rentas públicas y de gastos públicos, que el Gobierno debe formar y remitir al mismo tiempo que aquellas al Tribunal; y como comprobantes de la primera las de fabricacion y administracion del sello del Estado, efectos estancados y casas de moneda y minas esplotadas por el mismo.

»Art. 65. Las tres cuentas definitivas mencionadas formarán parte de la general del Estado que, por el año en que haya terminado la am-

pliacion del ejercicio del presupuesto á que aquellas correspondan, presentará el Gobierno impresas á las Córtes dentro del plazo determinado en el art. 57.

La cuenta anual comprenderá, además de las indicadas, las particulares del Tesoro, de la deuda pública, y de propiedades y derechos del Estado.

»Art. 66. La cuenta general de rentas públicas contendrá, con la debida distincion, el importe de los derechos que por cada contribucion, renta ó ramo se hayan liquidado á favor de la Hacienda, las cantidades cobradas y las pendientes de cobranza.

»Art. 67. La cuenta general de gastos públicos señalará los derechos liquidados á favor de los acreedores del Estado, ó sean las obligaciones de este, las cantidades pagadas y las que resulten sin satisfacer.

»Art. 68. La cuenta general del Tesoro contendrá las operaciones de ingreso y movimiento de fondos en las cajas públicas, y los créditos y débitos del Tesoro en principio y fin del año.

»Art. 69. La cuenta de la deuda pública tendrá por objeto la demostracion, por número y clases de efectos, de las operaciones de liquidacion, creacion, conversion y amortizacion realizadas durante el año, y la existencia que resulte al empezar y terminar el mismo.

»Art. 70. La cuenta de propiedades y derechos pondrá de manifiesto las fincas y derechos reales que posea el Estado al empezar el año; las incautaciones, adquisiciones y enajenaciones verificadas durante el mismo, y las que resulten existentes al terminar aquel período, haciendo la debida distincion de los bienes que estén en venta y de los que se utilicen para el servicio público. Además determinará esta cuenta el resultado de las ventas realizadas en el año, y el movimiento de los valores á cobrar que produzcan las enajenaciones.

»Art. 71. Interin la Caja de Depósitos conserve su actual organizacion, se formará ó imprimirá tambien, con la cuenta anual del Estado, la particular de las operaciones del establecimiento.

»Art. 72. Cuando por la importancia de un servicio ó por el tiempo y forma en que haya de cumplirse la ley que conceda el crédito necesario para realizarlo, ordene que se lleve de él cuenta separada, el Gobierno la presentará al Congreso con el correspondiente proyecto de ley en la época prescrita al autorizar el gasto, sin perjuicio de haber figurado las mismas operaciones en las cuentas generales de los períodos en que se hubiesen realizado.

»Art. 73. A todo proyecto de ley de aprobacion de cuentas acompañará una certificacion librada por el Tribunal de Cuentas, en que conste que habiendo sido examinadas y comprobadas con los resultados de las parciales presentadas al mismo Tribunal, y con las leyes y demás disposiciones que hayan autorizado los cobros y los gastos, han resultado conformes, espresando en caso contrario las diferencias observadas.

»Art. 74. El Tribunal de Cuentas remitirá directamente al Congreso, dentro del mismo plazo señalado al Gobierno para la presentacion de las cuentas generales, una *memoria*, en la cual, refiriéndose á lo que resulte de estas, esprese si se han cometido ó no ilegalidades en la cobranza y aplicacion de los fondos del Estado, determinando en caso afirmativo las que sean, y haciendo las demás observaciones á que dé lugar la cuenta examinada.

»Art. 75. Cada trimestre se publicará en la *Gaceta de Madrid* un estado de los créditos abiertos en el el anterior por el Tesoro á cada Ministerio, por capítulos, y otro estado de la aplicacion hecha por cada Ministerio, ó sea de la inversion dada á los fondos, segun los mismos capítulos del presupuesto.»

LEY PROVISIONAL DE ORGANIZACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO, DE 25 DE JUNIO DE 1870.

CAP. I.—*Del carácter y organizacion del Tribunal de Cuentas.*

«Art. 1.° El Trbunal de Cuentas es la autoridad á quien compete el conocimiento y resolucion final de las cuentas del Estado, y de los demás asuntos que son objeto de esta ley: su jurisdiccion es especial y privativa.....

»Art. 4.° Los nombramientos de presidente y ministros del Tribunal se harán libremente por las Córtes, sin que puedan conferirse aquellos cargos á individuos de ninguno de los dos Cuerpos colegisladores.

Con este objeto se formará una comision compuesta de siete senadores y siete diputados, cuya presidencia ejercerá alternadamente por legislaturas cada uno de los presidentes de las Cámaras.

»Art. 5.° Las Córtes nombrarán y separarán, segun dispone el caso 5.° del art. 58 de la Constitucion, á los funcionarios citados en el artículo anterior; pero estos, para ser nombrados, deberán reunir alguna de las condiciones siguientes:....

»Art. 10. El fiscal, el secretario, los contadores y demás empleados del Tribunal serán nombrados por el Gobierno con sujecion á las reglas siguientes:....

CAP. II.—*De las atribuciones del Tribunal.*

»Art. 16. Compete al Tribunal de Cuentas como autoridad superior:

1.° Requerir la presentacion de todas las cuentas que deban someterse á su calificacion, en la forma y época prescritas por las leyes, reglamentos é instrucciones, compeliendo á los more-

sos en presentarlas por los medios que se establecen en esta ley.

2.° Revisar el exámen que de las cuentas sometidas á su calificacion hubieren hecho la Direccion general de Contabilidad pública y la seccion que en el Ministerio de la Gobernacion tenga á su cargo la contabilidad provincial y municipal: exigir de quien corresponda los documentos que las espresadas cuentas requieran: poner los reparos que cada una ofrezca, oyendo las contestaciones de los interesados, y confirmar ó reponer el acuerdo adoptado por la administracion activa en los términos y por los trámites que esta ley establece.

3.° Conocer de los espedientes de reintegro á la Hacienda por alcances ó malversaciones de fondos públicos, descubiertos fuera del exámen de las cuentas.

4.° Declarar la absolucion de responsabilidad y cancelacion de sus obligaciones en favor de los que tengan fianzas presentadas para el manejo de caudales pertenecientes al Estado, ó á los fondos provinciales y municipales de que trata el artículo 1.°

5.° Conocer, en la forma que se determine por reglamento, de los recursos de apelacion que de los fallos de las diputaciones provinciales interpusieren los depositarios de ayuntamientos y los administradores de fondos de beneficencia, que resulten alcanzados en sus cuentas respectivas, con arreglo á lo que disponga la ley.

6.° Examinar y comprobar las cuentas generales del Estado que redacte la Direccion general de Contabilidad pública, y declarar su conformidad ó las diferencias que ofrezcan, cotejadas con las particulares presentadas al Tribunal y con las disposiciones del presupuesto correspondiente.

7.° Exigir de todas las dependencias del Estado, sin distincion de ramos ni Ministerios, ó de quien corresponda, cuantos informes, estados, documentos ú otros comprobantes considere útiles ó conducentes á los fines de su institucion, ya se trate del exámen de las cuentas, ó de la instruccion de los espedientes de alcances, desfalcos ó liberacion de fianzas; y tanto en estos casos, como en los de rendicion y presentacion de cuentas por los centros, oficinas ó particulares sujetos á darlas, compeler á los morosos por los medios de apremio gradual, que se establecen por esta ley.

8.° Librar y pasar al Gobierno certificacion del resultado que ofreciera el exámen y comprobacion de las cuentas generales del Estado.

9.° Redactar y presentar á las Córtes, dentro de los plazos señalados en la ley de administracion y contabilidad, una memoria relativa á la cuenta general de cada presupuesto, haciendo las observaciones y proponiendo las reformas á que dieren lugar los abusos advertidos en la recaudacion y distribucion de los fondos públicos. Esta memoria se publicará en la *Gaceta* del dia siguiente á aquel en que sea presentada á las Córtes.

10. Pasar al Gobierno copia de la memoria espresada en el caso anterior, en la misma fecha en que esta sea entregada á las Córtes, á fin de que dentro del plazo de dos meses puedan los Ministros responsables presentar á las mismas Córtes la oportuna contestacion de descargo.

11. Tomar razon de los espedientes sobre concesion de créditos extraordinarios ó suplementos de crédito que le pase el Gobierno, y presentar á las Córtes, dentro del primer mes de su reunion, una memoria relativa á los créditos concedidos por el Gobierno durante la suspension de sesiones, con las observaciones que juzgue oportunas respecto á la legalidad de cada uno de los créditos.

12. Examinar los espedientes de contratos para la adquisicion de fondos que le pase el Gobierno, y dar cuenta á las Córtes en memoria extraordinaria siempre que á su juicio se hubieran cometido en ellos faltas, abusos ó ilegalidades.

13. Dar cuenta á las Córtes, en memoria extraordinaria, de todo acto ilegal que los ordenadores é interventores de la administracion del Estado pongan en su conocimiento en descargo de su responsabilidad.

»Art. 17. Cuando el Tribunal observe retraso en la rendicion de cuentas, requerirá y compelerá directamente y de oficio para su presentacion á la Direccion de Contabilidad pública, y á cualquiera otra de las oficinas centrales de contabilidad que incurriere en demora.

Con respecto á los funcionarios particulares obligados á rendir cuentas, las oficinas centrales de su respectivo ramo emplearán desde luego los medios de coaccion que estén al alcance de su autoridad contra los morosos; y sólo en el caso de ser ineficaces sus esfuerzos, darán cuenta al Tribunal, quien procederá á compeler á los responsables en uso de su jurisdiccion superior.

»Art. 18. Los medios de apremio que el Tribunal podrá emplear gradualmente son:

1.° El requerimiento conminatorio.

2.° La imposicion de multas hasta la cantidad de 750 pesetas.

3.° La suspension de empleo y sueldo que no esceda de dos meses.

4.° La formacion de oficio de la cuenta retrasada á cargo y riesgo del apremiado.

5.° La propuesta al Gobierno de la destitucion del mismo, sin perjuicio de la formacion de causa por desobediencia, cuando en ella concurriesen circunstancias agravantes, á juicio del Tribunal pleno ó de las salas respectivas.

Estos medios de apremio regirán en toda su estension para los cuentadantes particulares directos. Respecto á los directores generales, la suspension de empleo y sueldo de que habla el caso

3.°, se propondrá al Gobierno; y no estimada por éste, su negativa será objeto de la memoria anual sobre los vicios ó abusos de la contabilidad, ó de una memoria estraordinaria, segun las circunstancias del caso.

»Art. 19. La jurisdiccion del Tribunal en los asuntos ya especificados alcanza, con derogacion de todo fuero, á todos los que por su empleo ó por comision temporal y especial administren, recauden ó custodien efectos, caudales ó pertenencias del Estado; á los ordenadores, interventores y pagadores, y á los herederos y causahabientes de todos ellos. En los casos de responsabilidad por abusos, infracciones ó faltas, ningun empleado ó comisionado podrá escusarse por obediencia debida, si no acreditara inmediatamente ante el Tribunal que hizo observar por escrito á su jefe ó superior inmediato la ilegalidad del acto, y que este repitió, sin embargo, órden escrita para su ejecucion. Cuando concurran estos requisitos, el Tribunal exigirá la responsabilidad á los jefes ordenadores, ó acordará lo conveniente conforme á los párrafos noveno, décimo y décimotercero del art. 16.

»Art. 20. El conocimiento de los delitos de falsificacion ó malversacion, y cualesquiera otros que puedan cometerse por los empleados en el manejo de fondos públicos, corresponde á los tribunales competentes, á quienes el de Cuentas remitirá el tanto de culpa que aparezca cuando en las cuentas ó espedientes de alcances hallare indicios de aquellos delitos, y no constase que se habia ya pasado el tanto de culpa por las dependencias interventoras de la administracion activa.

Este trámite se entenderá sin perjuicio de los procedimientos que correspondan administrativamente para el reintegro de los descubiertos.

Si al terminar el proceso criminal con sentencia condenatoria no estuviese todavía reintegrada la Hacienda por la vía administrativa, el juez que hubiese entendido en la causa remitirá al jefe ó centro que conozca del reintegro, testimonio de la ejecutoria y de los embargos que resultasen hechos, para sólo el efecto de cobrar el importe del alcance é intereses en su caso.

El sobrante de los bienes embargados quedará á disposicion del juzgado, y así se lo avisará inmediatamente el jefe que entienda en el reintegro.

»Art. 21. Los espedientes sobre cobranza de alcances y descubiertos se instruirán por la Direccion de Contabilidad pública ó por sus delegados, pasando á la jurisdiccion del Tribunal despues de resueltos administrativamente.

Si en estos procedimientos se suscitaren tercerías de dominio ó de prelacion de créditos, se reservará su conocimiento á los tribunales de justicia á quienes corresponda.

Tambien tocará á estos mismos tribunales el conocimiento de las contiendas sobre la legitimidad de las escrituras de fianza; sobre la estension de las obligaciones generales contraidas por los fiadores, además de la hipotecaria; sobre la calidad de heredero de los responsables, y en general sobre todas las cuestiones que puedan suscitarse en los espedientes de alcances ó de cuentas, en que haya de hacerse la declaracion de un derecho civil.

Mientras se ventilen las tercerías de dominio ó las cuestiones de derecho civil que sean necesariamente prejudiciales, el Tribunal de Cuentas suspenderá su procedimiento en solo lo relativo á los bienes y derechos controvertidos.

Por las tercerías sobre prelacion de créditos no se suspenderá el apremio; pero se conservará en depósito el producto en venta de los bienes litigiosos, para su adjudicacion al acreedor que sea declarado de mejor derecho.

»Art. 22. Los tribunales territoriales de Cuentas que existan en las posesiones de Ultramar, estarán bajo la vigilancia é inspeccion del Tribunal de Cuentas del Reino, en la forma que determinará un reglamento especial, sin perjuicio del fenecimiento en aquellos tribunales de las cuentas cuyo exámen y calificacion les competa conforme á sus respectivas ordenanzas.

CAP. III.—*De las atribuciones peculiares del presidente, del fiscal y del secretario.*

»Art. 23. El presidente, como jefe del Tribunal, tendrá á su cargo el gobierno interior del mismo, con las atribuciones que espresará su reglamento.

»Art. 24. Serán funciones peculiares del ministerio fiscal:

1.° Vigilar sobre la presentacion de cuentas al Tribunal, revisando el estado anual de los obligados á rendirlas, que forme la secretaría, dando dictámen sobre él antes que se apruebe por el Tribunal, y promoviendo los apremios correspondientes contra los morosos en presentarlas en las épocas prescritas por las instrucciones de contabilidad.

2.° Consignar por escrito su censura en las cuentas que al efecto dispongan pasarle las salas del Tribunal, y tambien en las que él solicite examinar ántes de formado el juicio sobre ellas. Para este último objeto bastará que requiera por oficio al ministro que haga de juez ponente en el exámen de cuentas.

3.° Ser oido en todos los casos de alzamiento ó cancelacion de fianzas, y en los que sobre declaracion de responsabilidad directa ó subsidiaria ofrezcan los espedientes de alcances y desfalcos.

4.° Promover la gestion criminal correspondiente, cuando se observen en las cuentas ó espedientes indicios de malversacion, falsificacion ú otro delito, pidiendo que se pase al tribunal competente el tanto de culpa, si no constase que ya

se habia hecho por las dependencias interventoras de la administracion activa del Estado.

5.° Representar á la Hacienda pública en todas las instancias de apelacion ante el Tribunal en pleno.

6.° Promover la observancia de los reglamentos del Tribunal, y sostener su jurisdiccion administrativa.

7.° Asistir y ser oido en todos los actos del Tribunal en pleno, y consignar por escrito su opinion, así sobre la comprobacion de las cuentas generales del Estado, como sobre los informes y memorias que debe dirigir á las Córtes el Tribunal.

8.° Evacuar los informes que se le pidan por el Gobierno ó por las Córtes, y dirigirles las consultas que crea convenientes en todo lo relativo al ejercicio de su ministerio.

9.° Resolver las consultas que puedan hacerle las dependencias interventoras de la administracion del Estado, que conozcan en primer grado del exámen y fallo de las cuentas, y de los espedientes de reintegro por desfalcos y alcances.....

CAP. IV.—*Del exámen y juicio de las cuentas.*

»Art. 27. El Tribunal de Cuentas despachará en pleno y dividido en tres salas.

El pleno lo compondrán el presidente, los ministros, el fiscal y el secretario, este con voto informativo.

Cada una de las salas se compondrá de tres ministros, uno de ellos letrado.

El presidente del Tribunal podrá asistir con voto á cualquiera de las salas cuando lo estime conveniente. En este caso la presidirá, y en su ausencia lo hará el ministro más antiguo.

»Art. 28. En cada sala hará de secretario un contador ó un auxiliar nombrado por el Tribunal.

»Art. 29. Las dos salas primeras del Tribunal conocerán de todas las cuentas y espedientes que procedan de la Península é islas adyacentes, y la tercera de las pertenecientes á las provincias de Ultramar.

»Art. 30. El Tribunal en pleno ejercerá las atribuciones contenidas en los párrafos primero, sesto, sétimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero del art. 16 de esta ley, y además resolverá los recursos de casacion ó súplica, que se interpongan por el Ministerio fiscal ó por los interesados, de los fallos de las salas en las cuentas y espedientes.

El Tribunal, dividido en salas, entenderá en los asuntos á que se refieren los párrafos segundo, cuarto, quinto y sétimo del referido art. 16 de esta ley, y en la revision de los espedientes de reintegro por desfalcos y alcances.

»Art. 31. Para que el Tribunal en pleno pueda preparar el informe anual á que se refiere el párrafo noveno del art. 16, las salas estarán obligadas á remitir á secretaría, segun vayan fallando sobre las cuentas, una copia autorizada de los cargos relativos á pagos no conformes con el presupuesto, aunque se hubiesen autorizado por disposicion del Gobierno.

Si los contadores no encontrasen abusos de esta clase que denunciar, lo certificarán así bajo su responsabilidad en la última censura.

»Art. 32. Las decisiones, así del pleno como de las salas, se adoptarán por mayoría de votos.

Para los fallos definitivos de cada sala se requieren tres votos conformes á lo menos; y no reuniéndose esta conformidad en la sala que conociese del negocio, asistirán para resolverlo ministros de las otras salas por el órden de su antigüedad, empezando por el mas moderno en cualquiera de ellas.

»Art. 33. Para el exámen de las cuentas y preparacion del juicio ante las salas, se distribuirán los contadores y demás subalternos del Tribunal en secciones, cada una de las cuales estará á cargo de uno de los nueve ministros, procurándose que cada seccion conozca de las cuentas por servicios concretos ó ministerios, segun se rindan al Tribunal.

»Art. 34. El contador encargado del exámen de una cuenta reconocerá y comprobará todas sus partidas con los documentos que las justifiquen; examinará los reparos y la censura de la Direccion de Contabilidad pública ó de la dependencia encargada del exámen administrativo, y estenderá á continuacion de esta la suya, proponiendo en su consecuencia la confirmacion de los acuerdos ó los reparos que juzgue procedentes para preparar el fallo del Tribunal.

»Art. 35. Censurada así la cuenta, se pasara al ministro de la seccion para el acuerdo correspondiente.

Este ministro consignará á continuacion su acuerdo, ya sea conformándose con la censura del contador, ó ya mandándola rectificar, segun proceda; y para que este acto se ejecute con suficiente conocimiento de causa, estará el ministro obligado á comprobar por sí algunos artículos de la cuenta con los documentos de su justificacion, y á examinar con especial cuidado los puntos sobre que versen las observaciones del contador.

Tambien deberá disponer, cuando menos una vez al mes, que se ejecute en su presencia la comprobacion ó nuevo exámen de una cuenta que él designe por distintos empleados que los que hubieren hecho el primero.

»Art. 36. Segun lo acordado por el ministro de la seccion, se formarán con órden y claridad los pliegos de reparos, debiendo estenderse por separado uno por cada uno de los responsables á quienes se refieran.

Cuando la formalizacion de los reparos ofrezca dudas ó grave interés, á juicio del ministro de la seccion, se dará cuenta de ellos á la sala á quien

corresponda para que los autorice ó acuerde lo más oportuno.

»Art. 37. En ningun caso podrá disponerse que se devuelva original una cuenta presentada ya al Tribunal, cualesquiera que sean sus defectos. Cuando se acordase su reforma, esta se hará con referencia á los documentos que acompañaron á la cuenta defectuosa.

»Art. 38. Formalizados los pliegos de reparos, se emplazará á los obligados á contestarlos, y se señalará término para su contestacion. Este término podrá prorogarse; pero en ningun caso escederá de dos meses que se fijan como improrogables, y empezará á contarse desde el emplazamiento.

El Tribunal, sin embargo, podrá ampliar lo necesario el plazo, cuando se dirija á individuos que residan en el estranjero ó en las provincias de Ultramar.

»Art. 39. El emplazamiento se hará por la secretaría del Tribunal á los responsables que hayan comparecido ante él, ó por medio de sus jefes respectivos á los ausentes, y consistirá en la entrega personal de una copia autorizada del pliego de reparos, exigiendo recibo que se unirá al espediente de la cuenta.

Cuando se ignorase el domicilio del interesado ó no fuese hallado en él, se verificará el emplazamiento por medio de anuncio público ó de cédula, en la forma que se prevenga en el reglamento.

»Art. 40. Los interesados en la cuenta que se examine y á quienes los reparos se dirijan, podrán comparecer por sí ó por medio de apoderado en el Tribunal; contestar por escrito á los reparos, y acompañar tambien documentos, solicitando del ministro de la seccion que se pidan de oficio los que contribuyan á su descargo y deban obrar en las oficinas públicas.

Si no comparecieren en el Tribunal, podrán hacer por escrito las mismas gestiones desde el punto en que residan; pero en todo caso el trascurso del término prefijado para la contestacion á los reparos les causará el perjuicio que haya lugar.

»Art. 41. Respecto de los reparos cuya documentacion deba existir en las oficinas públicas, se dirigirán de oficio á estas los pliegos desde luego para que contesten sin esperar gestion de parte de los interesados.

Si las oficinas fuesen morosas en el cumplimiento de este deber, el ministro de la seccion las requerirá con señalamiento de nuevo término, trascurrido el cual sin éxito dará cuenta á la sala respectiva, y esta podrá apremiar á los jefes de oficinas con suspension de empleos ó sueldos.

Las mismas oficinas estarán tambien obligadas, bajo su responsabilidad, á facilitar sin demora á los interesados en las cuentas certificacion formal de cuantas noticias ó documentos relativos á ellas obren en su poder y les sean reclamados por aquellos.

»Art. 42. Recibida la contestacion, ó trascurrido el término sin que el interesado contestase, el ministro de la seccion dispondrá que el contador estienda su censura de calificacion de los reparos: confirmada ó rectificada esta por dicho ministro, se dirigirá copia de ella al mismo interesado en la forma prevenida en el art. 38, con señalamiento de término, que no podrá exceder de 30 dias, para que haga las observaciones que estime oportunas, pudiendo acompañar tambien nuevos documentos; verificado lo cual, ó trascurrido aquel término, se declarará cerrada la discusion, y se pasará la cuenta á la sala respectiva para su decision.

Si el fiscal no hubiese ya intervenido en ella por gestion propia, la sala deliberará ante todas cosas si conviene oir sobre la cuenta su dictámen.

»Art. 43. Evacuado que sea el dictámen fiscal, ó habiéndose omitido este trámite, procederá la sala á la vista y calificacion de la cuenta.

En este acto hará de juez ponente el ministro de la seccion donde la cuenta se haya examinado, y de secretario el empleado que determine el reglamento.

La sala podrá llamar y pedir esplicaciones al contador respectivo, si lo estima conveniente. Tambien podrá acordar diligencias prévias, ó exigir documentos y noticias para mayor esclarecimiento, antes de proceder al fallo.

»Art. 44. La decision, que deberá ser motivada, se dictará en seguida; y consistirá, bien en aprobar definitivamente la cuenta en su totalidad, declarando libre de responsabilidad al que la presentó y demás interesados en ella; ó bien en determinar las partidas ilegítimas y no comprobadas, mandando rectificar la liquidacion ó exámen de la misma, y proceder para la cobranza de los descubiertos contra el que se designe como responsable de ellos.

En este último caso quedará en suspenso la aprobacion de la cuenta y absolucion de los responsables hasta despues de verificado el reintegro de los descubiertos.

Podrá, no obstante, absolverse desde luego al que presente la cuenta, si la sala no halla inconveniente, cuando la responsabilidad resulte contra otros funcionarios, sin perjuicio de hacer esta efectiva.

»Art. 45. La decision se notificará á las partes en la forma prescrita en el art. 39; se publicará en la *Gaceta* del Gobierno, y se comunicará á la Direccion de Contabilidad pública siempre que contenga declaracion de descubiertos. En este caso podrá el interesado reclamar á su tiempo que tambien se publique la aprobacion definitiva de la cuenta, cuando tenga lugar por haberse verificado el reintegro.

»Art. 46. Contra toda decision definitiva podrá intentarse recurso de aclaracion ante la sala que la haya dictado, siempre que fuere oscura ó ambigua en sus cláusulas.

»Art. 47. Tambien habrá lugar al recurso de revision ante la misma sala contra las resoluciones definitivas en los casos siguientes:

1.° Cuando despues de haber recaido decision definitiva sobre una cuenta, hubiere el interesado obtenido documentos nuevos que justifiquen las partidas desechadas.

2.° Cuando por el exámen de otras cuentas se descubran en la que haya sido objeto de una decision definitiva errores trascendentales, omisiones de cargos ó dobles datas y falsas aplicaciones de los fondos públicos.

Este recurso se promoverá respectivamente por los interesados en las cuentas ó por el fiscal, en virtud de denuncia, que estarán obligados á iniciar los contadores.

»Art. 48. Los plazos en que han de interponerse los recursos á que se refieren los artículos 46 y 47, su documentacion y demás requisitos, y los trámites que han de seguirse, se designarán y especificarán en el reglamento.

»Art. 49. Además de los mencionados recursos, se podrá interponer el de casacion ante el Tribunal en pleno cuando en la decision ejecutoriada hubiere infraccion manifiesta de disposiciones legales, ó cuando en la tramitacion del juicio se hubiesen violado las formas sustanciales de la actuacion establecidas por esta ley.

»Art. 50. Este recurso deberá interponerse en la sala que dictó la resolucion, en el término de 10 dias cuando las partes hubiesen comparecido ante el Tribunal, y de 30 en caso contrario, acreditando haber depositado 1,250 pesetas en la Caja general de depósitos ó en las sucursales de la misma, sin cuyo requisito no tendrá efecto el recurso. El fiscal no estará obligado á constituir el depósito.

»Art. 51. La sala pasará inmediatamente el espediente á la secretaría para que por el presidente se señale el dia de la revision ante el pleno, y á fin de que con la anticipacion necesaria se dé aviso del señalamiento á los interesados.

»Art. 52. Si el Tribunal en pleno declarase la nulidad de un fallo de las salas por haberse violado las formas sustanciales de la actuacion, ó porque en la decision hubiese infraccion manifiesta de disposiciones legales, la cuenta objeto del fallo será de nuevo examinada y juzgada por otra seccion y sala del Tribunal, subsanándose ante todas cosas los vicios del anterior procedimiento.

»Art. 53. Siempre que se declare no haber lugar al recurso de casacion ante el pleno, se condenará al recurrente en la pérdida de la cantidad depositada con aplicacion al Erario público.

»Art. 54. Las decisiones del Tribunal de Cuentas se llevarán á efecto desde luego, no obstante los recursos de revision ó de casacion que contra ellas se interpongan. Solo se suspenderá su cumplimiento cuando se consignase á las resultas del recurso en la caja general de Depósitos la cantidad en metálico que fuere materia del mismo.

»Art. 55. Cuando el fallo definitivo sea absolutorio, la cuenta se archivará con las actuaciones y la minuta original que deben correr unidas, y copia firmada del mismo se conservará en la secretaría para espedir la certificacion que ha de causar los efectos de finiquito y para su custodia en lo sucesivo.

»Art. 56. Siempre que el fallo sea condenatorio, la cuenta permanecerá en la sala hasta la ejecucion de lo fallado, debiéndose comunicar por la misma á la Direccion de Contabilidad pública para que se proceda á la cobranza de los descubiertos.

Realizados que sean estos en su totalidad, se participará así á la sala, y esta aprobará definitivamente la cuenta en la forma ordinaria.

»Art. 57. Ningun funcionario del Tribunal podrá intervenir en el exámen y juicio de una cuenta, cuando concurran en él alguna ó algunas de las circunstancias, que segun el derecho comun ó administrativo, induzcan á suponer parcialidad en favor ó en contra de los responsables.

Así estos como la parte fiscal, en su caso respectivo, podrán pedir la nulidad de lo actuado antes de ejecutoriado el fallo de la cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario contraventor. La forma y trámites de este recurso se consignarán en el reglamento.

»Art. 58. El Gobierno comunicará al Tribunal un traslado de todos los nombramientos, traslaciones ó separaciones de los empleados en el manejo de los fondos públicos para que el Tribunal, en el ejercicio de sus funciones, pueda tener conocimiento fácil del paradero y de la situacion de los responsables.

CAP. V.—*De los alcances y desfalcos.*

»Art. 59. Para hacer efectivos los alcances que resulten de las cuentas, se procederá en estos términos:

Cuando sea descubierto el alcance en el exámen que han de hacer las dependencias interventoras de la administracion del Estado, procederán desde luego las mismas, sin perjuicio de lo que acuerde el Tribunal, por la vía de apremio contra las fianzas y bienes del alcanzado, y contra los demás que, como fiadores, testigos de abono ó como jefes de aquel, puedan tener responsabilidad subsidiaria, guardando el órden correspondiente, y obrando con arreglo á las leyes administrativas y órdenes sobre la materia. Las referidas dependencias interventoras podrán delegar,

para la tramitacion del espediente, en sus agentes provinciales, los cuales procederán con estricta sujecion á las órdenes que aquellas les comuniquen.

Cuando el alcance se descubra en la revision que corresponde al Tribunal, la sala respectiva comunicará la sentencia ó fallo de la cuenta á la dependencia interventora de la administracion, para que proceda contra el alcanzado en los mismos términos indicados respecto á los alcances descubiertos por ella.

En uno y otro caso se dará cuenta al Tribunal de la solvencia de los alcanzados cuando termine la recaudacion de los descubiertos, para los fines espresados en el art. 56.

»Art. 60. La sala respectiva del Tribunal vigilará sobre el curso de los espedientes de reintegro, y exigirá el exacto cumplimiento de las prescripciones que contiene el artículo anterior.

»Art. 61. En los procedimientos de cobranza y responsabilidad de desfalcos causados por empleados, y descubiertos antes de las cuentas ó fuera de ellas, los respectivos jefes del alcanzado estarán sujetos á la jurisdiccion y vigilancia del Tribunal; debiendo dar parte sin demora á la Direccion de Contabilidad pública, ó sea á la dependencia interventora de la administracion del Estado, de la formacion del oportuno espediente, y proceder en ellos como en los de alcance con arreglo á las instrucciones que aquella oficina les comunique. Los jefes de los alcanzados entenderán en estos espedientes hasta ponerlos en estado de dictar el fallo ejecutorio. Este corresponde á la Direccion espresada.

»Art. 62. De las providencias que dicte la Direccion de Contabilidad pública en los espedientes de alcance y en los de desfalco, podrán los interesados responsables apelar para ante la sala correspondiente del Tribunal, interponiendo el recurso dentro de los cinco dias siguientes á aquel en que se les hubiese hecho saber.

»Art. 63. Una vez pronunciada la sentencia de la sala, será cumplimentado lo que se disponga en ella; pero si en la decision ejecutoria hubiese infraccion manifiesta de disposiciones legales, ó se hubiesen violado las formas sustanciales de la actuacion establecidas por esta ley, podrá suplicarse ante el Tribunal en pleno dentro de los diez dias siguientes al de la notificacion.

»Art. 64. El recurso espresado en el artículo anterior solamente suspenderá la ejecucion cuando los que lo interpongan consignen el importe del descubierto porque se proceda en la Caja general de Depósitos ó sus sucursales, ó cuando al admitirlos acordare el Tribunal la suspension por estimar segura la fianza.

»Art. 65. En las instancias de apelacion ó de súplica, de que tratan los arts. 62 y 63, se declarará concluso la actuacion con un escrito por cada parte; y si se ofreciese prueba, cuando no la hubiere, la sala ó el Tribunal respectivamente señalará para practicarla el término que estime prudente, pasado el cual se dictará la resolucion que proceda.

Este término no podrá esceder de 30 dias para la Península y de 45 para las islas adyacentes, y el que se considere necesario para las posesiones de Ultramar y el estranjero.

»Art. 66. En todos los espedientes de alcance ó desfalcos y sus incidencias será parte el fiscal por lo relativo á las actuaciones del Tribunal, y en estas hará de juez ponente el ministro letrado de la sala respectiva.

CAP. VI.—*De la cancelacion de fianzas.*

»Art. 67. Corresponde tambien privativamente al Tribunal la cancelacion de las fianzas que tuviesen prestadas los empleados públicos que rinden cuentas directamente al mismo.

La de las fianzas dadas por empleados subalternos, cuyas cuentas se incorporan en las de los respectivos jefes de provincia, corresponde bajo su responsabilidad á los propios jefes, con recurso de sus providencias al centro general respectivo.

La secretaría general del Tribunal no dará curso á ninguna instancia de los subalternos para acreditar su solvencia, sino cuando viniese por conducto de las oficinas principales, con justificacion de no encontrarse en ellas los datos necesarios para la cancelacion.

»Art. 68. El conocimiento del espediente de cancelacion corresponde á la sala que entienda en las cuentas del ramo respectivo, y su instruccion á la secretaría general. Presentada la instancia por el mismo empleado cuentadamente, ó por otra persona en su nombre autorizada al efecto con poder bastante, ó por sus herederos acreditada esta cualidad, se espresarán en ella con la debida distincion los destinos y la época de su gestion administrativa, como tambien la clase de fianza prestada, los documentos en que se haya consignado y la caja donde se hallen depositados sus valores, ó el lugar donde radiquen las fincas hipotecadas.

»Art. 69. La secretaría general acordará entonces todas cuantas diligencias sean conducentes á justificar el estado de las cuentas del recurrente hasta que resulte su definitiva solvencia, no solo por las cuentas, cuyo fenecimiento se hará constar, sino tambien por los cargos ó responsabilidades que independientemente de ellas puedan afectarle, á cuyo fin podrá dirigirse á todas las dependencias y oficinas dentro y fuera del Tribunal, así administrativas como judiciales, y todas están en el deber de suministrarle los datos y noticias que en ellas constasen, por medio de certificaciones autorizadas en debida forma.

Instruido el espediente, lo pasará la secretaría

con informe razonado á la sala respectiva; y oido préviamente el fiscal, dictará esta la providencia ó fallo que estime procedente, bien sea acordando la cancelacion de la fianza y su devolucion, si no estuviere afecta á otras responsabilidades, bien definiéndola para cuando se hayan removido las dudas ó inconvenientes que lo impidan.

»Art. 70. Estos fallos se notificarán á los interesados, ó á sus herederos ó representantes, y cuando se creyeren agraviados, tienen recurso de súplica, que deberán interponer ante la misma sala dentro del término perentorio de 10 dias, contados desde el siguiente al de la notificacion, y el espediente pasará original á otra sala, con emplazamiento del interesado por otros 15 dias. Si se suplicre y enmendare el fallo, la misma sala ejecutará lo juzgado: si se confirmare, no se dá recurso alguno, y el espediente original será devuelto á la sala originaria.

»Art. 71. Así la secretaría general como la sala darán razon á los interesados, siempre que la pidan, del estado de la instruccion y curso del espediente.

»Art. 72. Si en estos espedientes se promovieren cuestiones de derecho civil, ya por la antigüedad y prescripcion de las fianzas, ya por la estension y efectos del contrato de afianzamiento ú otro motivo análogo, se suspenderá su curso y se remitirá á los tribunales de justicia competentes, señalando á los interesados un término dentro del cual acrediten haber deducido sus demandas. Con presentacion de la ejecutoria que recayere acordará la sala del Tribunal de Cuentas lo que definitivamente corresponda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

»1.° Una comision de 14 diputados elegidos por las Córtes, que presidirá el presidente de la Cámara, desempeñará la mision que el art. 4.° de la ley del Tribunal de Cuentas confiere á la comision mista de senadores y diputados, interin no se reunan las Córtes ordinarias.

»2.° Publicada que sea esta ley, se pasarán al Ministerio de Hacienda todos los espedientes que se hallen en curso en el Tribunal sobre cobros de alcances, descubiertos y desfalcos.

»3.° Las cuentas de los ejercicios económicos que terminan en fin de Junio del año actual, serán examinadas, falladas y presentadas á las Córtes con arreglo á la ley de 25 de Febrero de 1850.

»4.° El Tribunal, de acuerdo con el Gobierno, publicará los reglamentos para desenvolver convenientemente las disposiciones de la presente ley.»

Por la ley de las Córtes Constituyentes, de 25 de Junio de 1870, se mandó que los proyectos de ley de administracion y contabilidad de la Hacienda y del Tribunal de Cuentas del Reino, que son las dos que preceden, rigieron desde luego como leyes del Estado, sin perjuicio de las alteraciones que en ellos acordasen las Córtes; cuyo acuerdo no ha recaido hasta el dia.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. De la contabilidad en la península.
Sec. II. De la contabilidad en ultramar.

SECCION I.

DE LA CONTABILIDAD EN LA PENÍNSULA.

Hemos indicado al principio el objeto de la contabilidad en cuanto á la Hacienda pública, cuya idea desenvolveremos respecto de la Península, de Ultramar, y del Tribunal de Cuentas, último criterio legal y garantía de la adecuada recaudacion, é inversion de los tributos y rentas del Estado. En la presente seccion trataremos de la primera, como su epígrafe lo indica, esponiendo á la vez algunas consideraciones generales acerca de esta materia.

Se entiende bien que la contabilidad de la Hacienda pública, para que sea completamente eficaz, no puede limitarse á consignar únicamente el movimiento de las sumas metálicas á su entrada y salida en caja: su influencia debe estenderse y se estiende, en efecto, á tomar desde su orígen los créditos activos y pasivos, siguiendo su curso hasta la completa estincion: las deudas que se han creado: los servicios que han debido realizarse: los derechos que se han declarado, sea en favor de un tercero, ó del Estado mismo: los ingresos de fondos: la ordenacion y pago de los gastos: la administracion y manejo de las diversas propiedades que posee la Nacion, de los diferentes objetos de esta, y finalmente de todo lo que constituya la riqueza pública. Todo ello debe reflejarse minuciosamente en los asientos de contabilidad; todo aparecer impreso en rasgos inalterables en los diversos registros llevados al efecto; todo irse anotando y perpetuando de modo que no se borre jamás, y á medida que van sucediéndose los hechos; y todo presentándose de tal suerte, que sea fácil conocer la situacion general, no

solo en las épocas fijas, señaladas por los reglamentos; sino en cualquier dia, en cualquier momento, que se pueda desear, ó en que sea preciso consultar sus resultados.

Para que pueda realizarse este fin, que debe ser el único, que domine en toda buena contabilidad, hay que valerse de fórmulas claras, metódicas, sencillas, que, sin embarazar la administracion, hagan fácil al mismo tiempo el trabajo de los empleados, que se dedican á estas funciones. Y á pesar de existir tales circunstancias, no siempre es mas fácil encontrar funcionarios, aptos para este objeto, que para cualquiera de los demás ramos de la ciencia administrativa. El empleado en contabilidad, además de reunir una instruccion especial, una exactitud técnica y perfecta, una atencion constante, y largo y fecundo criterio, capaz de inventar, si es necesario, y fecundo en recursos; ha de reunir un cierto espíritu de consecuencia y habitualidad facultativa, método, y notable prontitud en todos sus cálculos. Todo revela cuánto debe procurarse el acierto en la eleccion, y cuánto interesa su permanencia en tal servicio, sin lo cual no podemos hablar de buena contabilidad.

Tal y tan importante, como es la contabilidad y como deben ser sus empleados, no ha de confundirse, sin embargo, en ningun caso con la administracion misma, que no es sino una parte de ella. Es sin disputa su mas poderoso ausiliar, acompaña á la administracion en todos sus actos, mantiene el órden en sus disposiciones, se constituye en su vigilante perpétuo, modera su marcha, y le advierte, si por casualidad se desvia del camino, que tiene trazado.

No hay necesidad de notar que el sistema seguido sobre este particular, ha sufrido graves y profundas modificaciones, antes, y con mas especialidad en los tiempos modernos. Con solo reflexionar las alteraciones, que han esperimentado todas nuestras rentas é impuestos, en el trascurso de algunos años, es fácil comprender las que habrá sufrido la contabilidad.

Ya hemos dicho que el objeto fundamental de la contabilidad es uno solo, inalterable en cualquiera circunstancia, directo siempre á un fin, de antemano conocido; pero que los medios para llegar á él, tienen que estar subordinados, como los términos de un problema, al estado, que presente la cuestion, y que amoldarse y modificarse, segun las necesidades y los casos. Cuando no estaba en práctica el siste ma de publicidad, que hoy debe presidir á todos los actos de administracion general; cuando no se daba á la opinion pública la intervencion, que ahora ejerce sobre la marcha de los negocios del Estado; cuando la representacion del país no influia tan directamente en el establecimiento de los recursos, ni en la forma de los pagos; cuando ni aquellos ni estos se hallaban perfectamente limitados por el cuadro general, á que se dá el nombre de presupuestos de ingresos y de gastos, no era necesaria la misma transparencia, ni tanta minuciosidad, ni la reglamentacion, que en el dia se observa para gran parte de los diversos estremos que la contabilidad abraza. De aquí se inferirá la inutilidad de referirse minuciosamente, sobre este particular, á épocas anteriores, que rara vez podrian presentar casos de asimilacion, ni otras diferencias en el estudio comparativo de sistemas tan opuestos, que las esencialísimas, que se acaban de señalar rápidamente: de aquí tambien la conveniencia de entrar desde luego, y sin gran preparacion, en el sistema vigente de cuenta y razon, con solo hacerlo preceder de algun rasgo característico, que marque distintamente la diversa fisonomía, que presenta la gestion de la Hacienda en los últimos tiempos.

Conocida es la confusion y desconcierto que existia en la administracion económica de España, al terminar el siglo XVII. Multiplicidad de rentas, con denominaciones estrañas, y administracion áun mas estraña para cada una de ellas, hacian absolutamente imposible toda especie de método y hasta el menor asomo de regularidad. El Estado, además, se habia desprendido, casi por completo, del manejo de aquellas rentas; y asentistas ó arrendatarios particulares las esplotaban de la manera que es sabida. Llegó hasta el estremo de crearse un recurso, por medio de la venta pública de

los cargos mas importantes, inclusos las dignidades mas codiciadas y hasta el vireinato de los indios. El advenimiento de una nueva dinastía, la guerra desoladora, que se produjo, hasta que pudo aquella considerarse asegurada, y el estado de lamentable penuria, á que se hallaban reducidas todas las clases dependientes del Tesoro y el Tesoro mismo, hicieron pensar muy sériamente en el modo de salir de tan triste situacion, y se encargó al francés Orrí, patrocinado por la Princesa de los Ursinos, la formacion del plan conveniente. No dejaron de adoptarse medidas de grave importancia, entre ellas la reduccion de los arrendatarios generales de contribuciones al número de veintidos, igual al de las provincias, en que estaba dividida Castilla, al frente de cada cual se creó una Intendencia: la regularizacion de las operaciones del Tesoro, poniéndolas (1726) á cargo de un tesorero general, con sus respectivos dependientes en las provincias: y mas tarde la administracion directa por la Hacienda, de las rentas de un corto número de provincias, como ensayo, para sustraerse al funesto sistema de los arrendamientos. Estas diversas disposiciones fueron, por decirlo así, las precursoras de algun órden en la percepcion de las rentas públicas, y el principio del período, en que debia plantearse y regularizarse la contabilidad.

Menos dado al fausto, que Felipe V; opuesto á todo aquello, que pudiera traerle el compromiso de emprender una nueva guerra; parsimonioso, hasta la exajeracion, en cuanto se relacionaba con los gastos públicos, su sucesor, D. Fernando VI, perseveró tenazmente en la mejora y aumento de los caudales públicos, habiendo dejado á su muerte puntualmente satisfechos todos los gastos ocasionados, durante su reinado, y un sobrante en metálico en las arcas del Estado, como no hay memoria de que ocurriera antes de aquella época; ni es probable que se repita mas tarde. Es verdad que no ganó el crédito de la Nacion en una proporcion, igual á la en que habian crecido los fondos disponibles; porque habiendo hecho un corte de cuentas con los acreedores, anteriores á su advenimiento al Trono, dejó de pagar toda deuda que no fuera de su tiempo; mas, aparte de que las ideas sobre crédito público no se hallaban muy adelantadas por entonces, segun lo demuestra el resultado de la consulta, que hizo con este motivo á una junta de obispos, ministros y jurisconsultos, la cual aconsejó al Rey la suspension de pagos por no hallarse obligado á satisfacer las deudas contraidas por sus antecesores; en todo lo demás no puede negarse que trabajó con éxito, por introducir algun órden y regularidad en los diversos ramos de la Hacienda. Consiguió arrancar la percepcion de las rentas públicas de manos de los arrendadores, poniendo á cargo de la administracion general las de todas las provincias, que aun se hallaban en aquella situacion; creó las contadurías generales para los dispersos ramos productivos, y con la cooperacion de hombres tan eminentes como Campomanes, Ensenada, y en época posterior de Floridablanca y otros, la Nacion fué levantándose de su espantoso abatimiento, y la gestion de la fortuna pública tomando formas mas adecuadas á un régimen beneficioso.

Todavía, á principios de este siglo, se hallaba encomendada la contabilidad pública á contadurías diferentes, segun los ramos, sin el debido enlace entre sí, y sin que pudieran responder á un fin comun, ni á un pensamiento uniforme. Contaduría de ordenacion, contaduría de vales, de valores, de distribucion, de millones, de propios, de Indias etc., tales eran los diversos centros, á cuyo cargo corria la cuenta y razon de cada renta; y esto sin hacer mencion de otros ramos especiales, que marchaban separadamente. Despues de varias modificaciones, introducidas sucesivamente, en los años de 1816, 1820 y 1823, reduciendo unas veces el número de las contadurías generales, concediéndoles otras atribuciones diferentes, la disposicion mas notable que se encuentra, respecto del asunto, hasta la adopcion del actual sistema tributario, es el Real decreto de 5 de Enero de 1824, por el cual se estableció un nuevo sistema de cuenta y razon para la Real Hacienda, señalándose las atribuciones de la

Direccion general de rentas, de la Contaduría general de valores, de la Tesorería general, y de la Contaduría general de distribucion, creándose á la vez dos intendencias generales, una de ejército y de marina la otra. En la instruccion, que, con fecha 3 de Julio del mismo año, se dictó para llevar á efecto aquel Real decreto, se esplanan con una claridad y exactitud notables, no solamente la organizacion, dada á la administracion, recaudacion, distribucion y cuenta de la Real Hacienda, en su parte directiva y central; sino que se estiende, con igual minuciosidad, en lo referente á las provincias, y señala distintamente las atribuciones y deberes de todos y cada uno de los funcionarios de las diversas clases.

A nuestro propósito solo conviene mencionar aquí lo referente á contabilidad, la cual fué encomendada á dos grandes centros, en que se refundieron las diferentes contadurías generales, antes existentes, y á que se dió el nombre de Contaduría general de valores y Contaduría general de distribucion. Establecida la primera, cerca de la Direccion general de rentas, era la autoridad superior en todo lo relativo á la contabilidad, fiscalizacion é intervencion de la administracion y recaudacion de los diferentes productos por contribuciones é impuestos (capítulo 3.° de dicha Instruccion). La Contaduría general de distribucion fué establecida cerca de la Tesorería general, y era á su vez la autoridad superior, en lo relativo á contabilidad, fiscalizacion, é intervencion del Reino ó inversion de los productos líquidos de la Real Hacienda.

Una y otra Contaduría dependian inmediatamente del Ministerio de Hacienda, de quien recibian las órdenes directamente, y una y otra tenian por auxiliares ó dependientes en las provincias á los contadores de ellas, los cuales disfrutaban del doble carácter de jefes principales de contabilidad é intervencion en la recaudacion de las contribuciones, rentas y pertenencias de la Corona, á la vez que en la distribucion de sus productos totales. Siendo de advertir, para mejor inteligencia de lo que acaba de espresarse, que por entonces se consideraban con entera separacion los productos de las rentas y propiedades, dividiéndose aquellos en totales y líquidos, entendiéndose por totales los rendimientos todos, que se obtenian, sin deduccion alguna; y por estos el sobrante disponible, despues de satisfechos los sueldos, gastos de administracion, y los capitales afectos á la reproduccion de las rentas. Dichos productos totales se hallaban á cargo de la Direccion general de rentas, y los líquidos al de la Tesorería general, con subordinacion ambos centros á la Secretaría del despacho de Hacienda.

Desde esta época, hasta el planteamiento del sistema tributario, en 23 de Mayo de 1845, pocas, y de escasa importancia han sido las alteraciones introducidas en el régimen de contabilidad, pudiendo citarse entre estas la refundicion de las dos contadurías generales de valores y de distribucion, en una sola, denominada Contaduría general del Reino, y cuya medida tuyo lugar en 1.° de Enero de 1843, en virtud de Real decreto, espedido con fecha 28 de Octubre del año anterior.

Era consiguiente que al cambio tan radical, introducido en la forma de los impuestos públicos, siguiera ó acompañara la en que debia llevarse la cuenta y razon de ellos. Así es que, con la propia fecha de 23 de Mayo de 1845, en que se establecieron la contribucion de subsidio industrial y de comercio, la de inmuebles, cultivo y ganadería, la de inquilinatos, la de consumos, la del derecho de hipotecas etc., casi todas las cuales constituyen aun en el dia la base de nuestro sistema rentístico, á pesar dè las convulsiones porque ha pasado la Nacion, y de los embates, á que aquellas han estado espuestas en medio de la lucha de doctrinas económicas tan diferentes, se daba tambien nueva organizacion á la administracion central y provincial de la Hacienda pública, señalándose las atribuciones y deberes de la Contaduría general del Reino (cap. 4.° de la espresada ley), á la cual se la designó por Real decreto de 20 de Junio de 1850, con el nombre de Direccion general de contabilidad de la Hacienda pública; y se creaban en las provincias las secciones de contabilidad, convertidas mas tarde en contadurías de provincia, independientes de la Administracion,

y hoy en intervenciones, dentro de la misma Administracion, segun se verá mas adelante.

Grande fué el impulso, y muy considerable el desarrollo, que se dió á nuestra legislacion de contabilidad por los Reales decretos de 24 de Octubre de 1849, así como por las Reales Instrucciones de 25 de Enero y 20 de Junio de 1850; pero donde aquella recibió su complemento, consignándose todos los mas sanos principios de la ciencia, los que sirven de norma á las naciones mas adelantadas en la cuenta y razon de las rentas del Estado, fué en la ley de 20 de Febrero de 1850, ligeramente modificada por el Real decreto de 3 de Febrero de 1856, y conservada en su esencia, y hasta en su estructura particular, por la nueva ley provisional que acaba de promulgarse con fecha 25 de Junio de 1870.

Con arreglo á los principios fundamentales, consignados en la espresada ley de 20 de Febrero de 1850, se reglamentaron todas las operaciones de contabilidad, que debian practicarse por los funcionarios de la administracion provincial; se deslindaron las que correspondian á la Direccion general de contabilidad, en su carácter de centro superior, á donde deben confluir todas las cuentas parciales; se determinaron la forma y trámites de procedimiento para las altas funciones, que está llamado á ejercer el Tribunal de Cuentas del Reino, y se dispuso, por último, la forma de elevar al conocimiento supremo y sancion de las Córtes las cuentas generales definitivas de cada año económico.

Establecida así la graduacion y enlace de todas las operaciones, por medio de un riguroso órden gerárquico; señalada una pauta uniforme para todas ellas, por medio de los oportunos formularios, remitidos préviamente á todos los *cuenta-dantes*, fué facil ver surgir en su orígen esas cuentas parciales, que han de formar el total de las del Estado, agruparse y depurarse en la Direccion general de contabilidad, que es la encargada de redactar las cuentas generales, conforme á los grupos designados por la ley orgánica, á saber: de rentas públicas, de gastos públicos, del Tesoro público, de presupuestos, de Deuda pública, de fincas del Estado, y de la Caja general de Depósitos; encontrarlas mas tarde en el Tribunal de Cuentas del Reino para su exámen, censura y fallo; y últimamente, con la certificacion, ó atestado de conformidad de aquel alto cuerpo, ser presentadas á las Córtes por el Ministro del ramo para su aprobacion definitiva. De este modo, y merced al mecanismo, que acaba de describirse en su conjunto esterior, es posible presentarse uno á sí mismo, bajo un solo cuadro, la liquidacion y cobranza de las contribuciones, rentas y derechos; la liquidacion y el pago de los gastos y servicios; las operaciones de caja y negociaciones del Tesoro; la correspondencia y relacion, que todo esto guarda con las previsiones de los presupuestos del Estado; la administracion de su Deuda; la de las diversas propiedades, que corren á cargo del Fisco, y las operaciones, realizadas por la Caja general de Depósitos.

Y no solamente puede verse así descrita, y á un solo golpe de vista, la administracion general de la fortuna pública; sino practicado el gran principio de hallarse sometidos al fallo de la Representacion Nacional y al juicio de la opinion pública, todos los actos del Gobierno y la responsabilidad de sus delegados. Justo es añadir, sin embargo, para no faltar á los fueros de la verdad, y aunque sea mitigando algun tanto los brillantes colores, que ofrece la descripcion anterior, que no siempre, si bien por circunstancias varias, se han apresurado los Gobiernos á presentar oportunamente la cuenta general del Estado á la aprobacion de las Córtes; ni estas á examinarla y prestarla su sancion. En el momento en que estas líneas se escriben, ha empezado ya á regir el presupuesto de 1870 á 1871, y hasta el año corriente de 1870 no se han presentado aun mas cuentas que las referentes al período de 1865 á 1866; ni las Córtes aprobado otras que las pertenecientes al año de 1861.

Con posterioridad al corto período, que acabamos de describir, grande por sus resultados, y en el que la contabilidad de la Hacienda pública habia llegado á un estado de perfeccionamiento, verdaderamente envidiable, han ocurrido en nuestra pátria sucesos

políticos de inmensa trascendencia, que no han podido menos de ejercer su accion sobre la marcha de la administracion económica, en sus diferentes esferas. Han sido suprimidos impuestos de verdadera importancia, como los consumos; se han modificado otros de una manera esencial; ha sido reformado el servicio económico de las provincias, dándose una nueva planta á las clases de empleados, que lo desempeñan; se ha dictado una nueva ley de administracion y contabilidad de la Hacienda, y otra de organizacion del Tribunal de Cuentas del Reino, aunque con el carácter de provisionales las dos últimas, cual vemos en la parte legislativa.

Sin descender á un exámen minucioso de estas disposiciones, algunas de las cuales afectan, como no puede menos, al órden de contabilidad, no es posible dejar de detenerse, siquiera sea brevemente, en el decreto de la Regencia, fecha 8 de Diciembre de 1869, por el cual se dá nueva organizacion á la administracion económica de las provincias, y en la ley provisional para la administracion y contabilidad de Hacienda, fecha 25 de Junio de 1870.

Suprímense, en virtud del decreto, antes citado de 8 de Diciembre, las contadurías, que existian en cada provincia, independientes de la administracion, y se crean en su lugar, dentro de la administracion misma, secciones de intervencion, á las cuales se señalan próximamente las mismas atribuciones y deberes, que aquellas tenian, aunque subordinados al nuevo pensamiento, que ha presidido á su creacion, y á la forma, que se les ha dado. No es de este lugar, y por otra parte nos llevaria demasiado lejos, el exámen detenido de una reforma, que, aunque espuesta así sucintamente, aparece muy sencilla, importa, sin embargo, grandemente en el desolvimiento de la administracion de las rentas públicas y en los resultados de su recaudacion y contabilidad. El objeto fundamental de dicho plan parece ser la reduccion de los gastos del personal, que se calcula llega á cuatro millones de reales, la simplificacion de trámites en muchos asuntos, y la unidad en la accion administrativa. Ventajas son estas de indisputable importancia, seguramente, y dignas de merecido aplauso, si con efecto corresponden los resultados al propósito por todos apetecido; aunque falta todavía la esperiencia conveniente, que autorice á emitir un juicio acertado y justo. Algunas consideraciones podriamos adelantar, que lo pondrian en duda; pero estamos esponiendo y no juzgando: la imparcialidad nos obliga á esperar los resultados. Si contra todo lo que parece fueran plausibles, nosotros seremos los primeros á aplaudirlos.

Diremos ahora, que además de las leyes orgánicas sobre contabilidad, en el exámen de alguna de las cuales nos hemos detenido ligeramente, existen otras varias disposiciones de grande importancia, que se desarrollan, ya periódicamente; ya segun lo exigen los casos, por medio de circulares del respectivo centro directivo, y que es de todo punto preciso conocer para formar juicio exacto, en sus detalles y mecanismo interior, de este ramo importante de la pública administracion. Las leyes de presupuestos, que como transitorias, se modifican todos los años, introducen con frecuencia alteraciones en la manera de existir de ciertas contribuciones, varían la nomenclatura de otras, cambian la estructura de algunos ramos, y todo esto es preciso hacerlo conocer de los agentes directos de la contabilidad, dándoles las oportunas instrucciones. Por otra parte, el trascurso del tiempo, la negligencia, que se apodera de algunas dependencias subalternas, la variacion de sus empleados y la falta consiguiente de tradicion en la marcha de estos negocios, hacen frecuentemente necesario reproducir algunas disposiciones, y ampliarlas, ó esplicarlas convenientemente, á fin de ponerlas al alcance de todas las inteligencias.

Entre las que han sido dictadas con ese objeto, debemos hacer mencion especial de la notabilísima circular, que con fecha 30 de Agosto de 1868 y en forma de instruccion, fué remitida por la Direccion general de Contabilidad á todos sus subordinados. Hállanse en ella, recopiladas de una manera clara y precisa, cuantas disposiciones regían has-

ta entonces en materia de cuenta y razon; y tanto por su método, como por la profusion de citas, constituye un cuerpo de legislacion y de doctrina, de necesario estudio para los que tienen obligacion de rendir cuentas de la administracion económica y del Tesoro, y de inapreciable consulta para cuantos por su cargo, ó solamente por aficion, hayan de entrar en el exámen y juicio crítico de aquellas. Ya hemos indicado anteriormente cuán grande es la importancia de estas cuentas parciales, para estimar debidamente su conjunto; pues si hubiéramos de profundizar lo bastante á conocer por completo su mecanismo, á ninguna parte podria recurrirse con mas provecho que á la indicada circular; pero seria preciso un abultado libro, como lo es por sí solo tan apreciable documento.

Nuestro objeto por hoy era, sin embargo, dar una idea, la mas clara y sucinta posible, de la contabilidad de Hacienda en general, y de la manera con que esta se halla organizada entre nosotros, lo que creemos haber realizado.

El Tribunal de Cuentas es sin duda el comprobante, y la última y segura garantía de la buena contabilidad. En este concepto no podíamos menos de hacer mencion de él en este artículo; pero solo para evitar una reparable omision, puesto que la contabilidad de la Hacienda empieza en la provincia, se asegura en los altos centros, de que hemos hecho mencion, y se solemniza, comprueba y evidencia en el Tribunal de Cuentas. Bajo esta enunciacion general, su conexion é importancia se comprueban sin mas que confrontar las leyes de su organizacion con las de contabilidad; por lo cual, y para ilustrar y auxiliar el criterio de nuestros lectores, se las presentamos reunidas en la parte legislativa. Por lo demás la historia, la organizacion y la importancia del *Tribunal mayor de Cuentas* primero, del *Tribunal especial de Cuentas* despues; y hoy tal cual se le conoce, requiere artículo aparte, y véase **TRIBUNAL DE CUENTAS.**

Ultimamente con fecha 12 de Agosto de 1870, se ha publicado, un decreto del Regente del Reino, aprobando el reglamento del cuerpo de contabilidad y tesorería del Estado, que se considera especial en la carrera de Hacienda. Como todo lo que tienda á regularizar y fijar la suerte de los empleados, lo consideramos beneficioso y muy apropósito para mejorar la administracion, particularmente en este ramo importante de ella, no era posible que dejáramos de mencionar, al menos, una disposicion, que, cualquiera que sea la eficacia con que llegue á llevarse á la práctica, establece un precedente plausible en todos conceptos.

Consta dicho reglamento de 52 artículos, distribuidos en seis capítulos, cada uno de los cuales, y por el órden con que los enunciamos, establece las reglas para la organizacion del cuerpo, las condiciones de admision é ingreso, las del ascenso, el escalafon, las faltas y su correccion, y la traslacion, cese y separacion de los empleados. Acompaña, en fin, un programa de los conocimientos que se exigen para el ingreso en dicho cuerpo, los cuales se han de acreditar en diversos ejercicios, que deben versar sobre determinados puntos de aritmética, de geografía, de teneduría de libros, de ecomía política y legislacion especial de contabilidad.

SECCION II.

DE LA CONTABILIDAD EN ULTRAMAR.

Entrando como parte principal en la organizacion administrativa de aquellas provincias, que las autoridades, en su gran mayoría, hayan desempeñado, y casi aun desempeñan funciones judiciales, gubernativas, y económicas á la vez, no es fácil señalar desde un principio la línea divisoria que al sistema de contabilidad, propiamente dicho, correspondia, ni el verdadero enlace de sus operaciones entre sí.

En la Recopilacion de las leyes de Indias, y principalmente en los títulos 1.° y 2.° del libro 8.°, que tratan, el uno de las contadurías de cuentas y sus ministros, y el otro de los contadores de cuentas, de resultas y ordenadores, se hallan, sin embargo, reglas muy aceptables para la buena administracion, cuenta, y cobro de las rentas, en todos los

reinos y provincias de las Indias, y sobre todo dignos del mayor respeto por la época, á que se refieren, y el gran adelanto que revelan en la ciencia de administrar.

Dividiéronse entonces en tres centros diferentes ó tribunales, la dacion, conocimiento y censura de las cuentas pertenecientes á aquellos reinos, teniendo su residencia el uno en la ciudad de los Reyes, de las provincias del Perú, el otro en la de Santa Fé, del nuevo Reino de Granada, y el tercero en la de Méjico.

Desmembrado mas tarde la mayor parte del continente americano, y reducida por último nuestra dominacion á las Islas de Cuba y de Puerto-Rico en aquellos paises, y á la de Filipinas en el Asia, continuaron rigiendo las disposiciones citadas respecto de la cuenta y razon, aunque dándose nueva organizacion á sus dependencias. Creóse en la Habana un tribunal de cuentas, con fecha 17 de Abril de 1770, igual en atribuciones y facultades á los que existian anteriormente en Méjico, Lima y Santa Fé. En 27 de Abril de 1776 se creó, para Filipinas, otro tribunal de cuentas: y últimamente por Real instruccion y cédula de 15 y 21 de Setiembre de 1832, se estableció para Puerto-Rico otro tribunal de cuentas, independiente del de la Habana. Ya para entonces se habia hecho estensiva á las provincias ultramarinas (14 de Noviembre de 1831) la Real cédula y ordenanza de 10 de Noviembre de 1828, en lo perteneciente á la presentacion, glosa y fenecimiento de las cuentas de aquellas posesiones.

Hasta qué punto, por medio de estas disposiciones, y por las reformas verificadas despues en 1833, llegó á regularizarse la contabilidad de Ultramar, estableciéndose la unidad y centralizacion necesarias, se encuentra convenientemente espresado en el preámbulo del Real decreto de 7 de Enero de 1850, por el cual se creaba, dentro del Ministerio de Hacienda, una direccion especial para los asuntos de Ultramar; direccion que mas tarde tuvo una existencia propia cerca de la Presidencia del Consejo de Ministros; y que por último ha llegado á convertirse en Ministerio del ramo, para los asuntos que se refieren á aquellas posesiones, si se esceptúan los muy importantes de guerra y de la marina. Deciase así en el mencionado preámbulo: «La contabilidad de las provincias »de Ultramar, apenas tiene enlace con la ge»neral; la inspeccion del Gobierno es ine»caz; el órden, si existe, no se conoce; los »males, si los hay, no pueden remediarse, »faltando absolutamente la regularidad y el »buen órden.»

Poco tiempo despues, es decir, en 29 de Mayo de 1851, se dictaba un Real decreto, aprobando la ordenanza del Tribunal de Cuentas de la isla de Cuba. En él pueden verse la trabazon y enlace de las diferentes dependencias, sujetas á la rendicion de cuentas: el pensamiento general, que preside á aquella disposicion, se halla condensado en sus dos primeros artículos que dicen: «El Tribunal de Cuentas de la isla de Cuba ejercerá la autoridad privativa para el exámen, aprobacion y fenecimiento de las cuentas de administracion, recaudacion y distribucion de los fondos, rentas, y pertenencias del Estado en la isla, así como tambien de las relativas al manejo de fondos municipales y de los administrados por cualesquiera dependencias ó establecimientos públicos de la misma. El tribunal tendrá el carácter de superior territorial, y será considerado como delegado del de cuentas de la Metrópoli, del cual dependerá para el efecto de ser vigilado y responsable en el ejercicio de sus funciones, al tenor de lo que se prescribe en esta ordenanza.»

Cuantas medidas se han venido dictando posteriormente, respecto de la contabilidad de Ultramar, todas han manifestado la tendencia de asimilar en lo posible la legislacion de nuestras posesiones á la que regia en la Península. Así es que ya en la esposicion y Real decreto de 6 de Marzo de 1833 se prescribe la formacion regular y ordenada de presupuestos, sujetándose á ellos todas las operaciones de recaudacion y pagos, mandando ingresar en las tesorerías generales los fondos públicos, cualquiera que fuese su denominacion, y suprimiéndose las diversas pagadurías especiales que subsistian. A partir

de ese mismo año de 1855, puede asegurarse que la base, sobre que descansan cuantas disposiciones se han adoptado en este particular, está fundada en nuestra ley orgánica de contabilidad de 20 de Febrero de 1850, hallándose virtualmente en vigor, por lo tanto, en las provincias de Ultramar.

Una medida importante aparece realizada en los presupuestos formados para 1867 á 1868, que consiste en la supresion de los tribunales de cuentas en las indicadas provincias, creándose en su lugar una sala llamada de Indias, cerca del de la misma clase existente en la Península. No es de este lugar entrar en el exámen de las ventajas é inconvenientes de semejante disposicion: no ha trascurrido tampoco tiempo bastante para juzgarla con acierto, por mas que nuestra primera impresion le sea desfavorable. Indícase, sin embargo, como muy probable su derogacion en un próximo período, lo cual traeria por lo pronto la pérdida de gastos considerables ya realizados, y la existencia precaria de instituciones que merecen respeto y gran estabilidad. Es justo, sin embargo, esperar los resultados, y á ellos subordinaremos nuestro juicio.

CONTABILIDAD MERCANTIL. La forma especial y determinada en que los comerciantes están obligados á llevar las cuentas de su tráfico. Es decir, que si todos, en los negocios de la vida, deben vivir con cuenta y razon, el comerciante, en los negocios como tal, está obligado á llevarla de un modo especial, y precisamente en la forma y con las penas que determina el Código de comercio.

La índole misma del tráfico, que teniendo por base la buena fé, liga y puede comprometer la de los demás, lo requeria, y la ley ha venido oportunamente en su auxilio con prescripciones y sanciones, de que haremos mérito, para que en todo evento pueda evidenciarse la del comerciante, y esplicarse por causas estraordinarias ó por causas previstas, los accidentes de su fortuna, y exigírsele mayor ó menor responsabilidad, en caso de quiebra.

Dichas prescripciones y sanciones penales se hallan consignadas en la seccion 2.ª del título 2.º, libro 1.º del Código de comercio, que lleva por epígrafe *De la contabilidad mercantil*. Vamos á esponerlas con la misma precision que las establece la ley.

Todo comerciante, de cualquier clase que sea, está obligado á llevar cuenta y razon de sus operaciones, en tres libros, *á lo menos*, que son y se titulan: *libro diario, libro mayor ó de cuentas corrientes*, y *libro de inventarios* (art. 32 de dicho Código).

«En el *libro diario* se sentarán, dia por dia, y segun el órden en que se vayan haciendo, todas las operaciones que haga el comerciante en su tráfico, designando el carácter y circunstancias de cada operacion, y el resultado que produce á su cargo ó descargo; de modo que cada partida manifieste quién sea el acreedor, y quién el deudor, en la negociacion á que se refiere» (art. 33).

«Las cuentas corrientes con cada objeto ó persona en particular se abrirán por *debe* y *ha de haber* en el *libro mayor*, y á cada cuenta se trasladarán por órden rigoroso de fechas los asientos del diario» (art. 34). En la práctica se ponen el *debe* y el *ha de haber* en columnas ó páginas paralelas, por cuyo medio puede verse y comprobarse fácilmente el estado de la cuenta.

«Tanto en el *libro diario*, como en una cuenta particular, que al intento se abrirá en el mayor, se harán constar todas las partidas que el comerciante consuma en sus gastos domésticos, haciendo los asientos en las fechas en que las estraiga de su caja con este destino» (art. 35). Esta disposicion tiene por objeto el de que pueda apreciarse, en caso de quiebra, si el comerciante ha venido á tal estado por gastos escesivos, lo cual le constituiria en quebrado de tercera clase, segun el art. 1005 del propio Código.

«El *libro de inventarios* empezará con la descripcion exacta del dinero, bienes muebles é inmuebles, créditos y otra cualquiera especie de valores, que formen el capital del comerciante al tiempo de comenzar su giro. Despues formará cada comerciante anualmente, y estenderá en el mismo libro el balance general de su giro, comprendiendo en

él todos sus bienes, créditos y acciones, así como tambien todas sus deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omision alguna, bajo la responsabilidad que se establece en el libro de quiebras. Todos los inventarios y balances generales se firmarán por todos los interesados en el establecimiento de comercio á que correspondan, que se hallen presentes á su formacion» (artículo 36).

En los inventarios y balances de las sociedades mercantiles, no hay necesidad de incluir las pertenencias y obligaciones peculiares de cada sócio; sino solo las que son comunes de la masa social (art. 37).

Los mercaderes ó comerciantes por menor no están obligados á hacer el balance general sino cada tres años, ni á sentar en el libro diario sus ventas individualmente; sino que es suficiente que hagan cada dia el asiento del producto de lo vendido al contado en todo él, y pasen al libro de cuentas corrientes las que hagan al fiado (arts. 38 y 39).

Dichos tres libros son de rigorosa necesidad en el órden de la contabilidad mercantil, pues así lo prescribe la ley. Sin perjnicio de ellos, pueden llevar además los comerciantes todos los libros auxiliares que estimen conducentes para el mejor órden y claridad de sus operaciones; pero, para que puedan aprovecharles en juicio, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto á los tres libros necesarios (art. 48).

Estos libros han de estar encuadernados, forrados y foliados; en cuya forma los presentaba cada comerciante al tribunal de comercio de su domicilio, para que por uno de sus indivíduos y el escribano del mismo tribunal fuesen rubricadas todas sus hojas, poniéndose en la primera una nota fechada, suscrita por ambos, de las que contiene el libro. En los pueblos, donde no habia tribunal de comercio, se debian cumplir estas formalidades por el magistrado civil, y su secretario, que es lo que se hace hoy en todas partes, desde que fué abolida la jurisdiccion especial de comercio por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868. Por el art. 22 de este decreto se reformó el 40 del Código de comercio en el sentido indicado, previniéndose que deben presentarse los libros en el juzgado de primera instancia del partido, y si hay mas de uno, en el del domicilio del comerciante, para que por el juez y un escribano se ponga la nota antedicha, y en todas las hojas el sello del juzgado, en vez de la rúbrica, sin que puedan exigirse derechos por esta diligencia.

Dichos libros deben llevarse en idioma español bajo la multa de mil á seismil reales, y de hacerse á espensas del comerciante, que los lleve en otro idioma ó dialecto, la traduccion de los asientos que se manden reconocer y compulsar, sin perjuicio de obligarle á que los trascriba al español (art. 54 del mismo Código).

Está tambien prevenido que el libro diario se lleve en papel sellado, lo cual se ejecuta uniéndole el de pagos al Estado que corresponda, á razon de 60 milésimas de escudo por cada hoja. Sobre este punto véase el Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, la órden del Regente de 31 de Diciembre de 1869, sobre papel sellado, y la Real órden de 14 de Junio de 1868.

Está prohibido, respecto al modo y forma de llevar los libros de contabilidad mercantil, alterar en los asientos el órden progresivo de fechas y operaciones; dejar blancos ni huecos, pues todas las partidas se han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede espacio, para adicionar ni intercalar cosa ninguna; hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas; tachar ningun asiento; mutilar ninguna parte del libro, ni arrancar alguna hoja, ni alterar su encuadernacion y foliacion (art. 41 del Código).

Los libros, que carezcan de dichas formalidades, ó en los cuales se noten algunos de los espresados defectos, no tienen valor ninguno en juicio, respecto del comerciante á quien pertenezcan, el cual incurrirá además en una multa de mil á veinte mil reales, que los jueces graduarán segun las circunstancias, sin perjuicio del procedimiento criminal, que corresponda; y en las diferencias que le ocurran con otro comerciante, cuyos libros estén arreglados y sin tacha, se estará

á lo que de estos resulte (arts. 42, 43 y 44).

Los libros de comercio que tengan todas las formalidades prevenidas y no adolezcan de vicio legal, constituyen medios de prueba en negocios mercantiles, que dén lugar á litigios entre comerciantes. Sus asientos probarán contra aquellos, á quienes pertenezcan los libros, sin admitírseles prueba en contrario; pero el colitigante no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen; sino que estará á las resultas combinadas, que presenten todos los asientos, relativos á la cuestion, una vez propuesto este medio de prueba, del cual prescindirán los tribunales, cuando resulten contradicciones de los libros, que respectivamente lleven las partes litigantes, con tal que unos y otros aparezcan sin vicio legal de ninguna clase (art. 53).

Los comerciantes son responsables de la conservacion de los libros y papeles de su giro, por todo el tiempo que dure éste, y hasta que se realice la liquidacion de todos sus negocios y dependencias mercantiles; obligacion y responsabilidad, que incumbe tambien á los herederos cuando fallece el comerciante (art. 55).

Si alguno careciese de la aptitud necesaria para llevar los libros y firmar sus documentos de giro, nombrará indispensablemente y autorizará, con poder especial y bastante, á una persona, que de ambas cosas se encargue (art. 47); de lo cual habrá de darse noticia al público, y muy especialmente á las personas, con quienes aquel tenga negocios ó correspondencia mercantil, en la forma acostumbrada.

No se puede hacer pesquisa de oficio para inquirir si los comerciantes llevan ó no sus libros arreglados. Tampoco puede decretarse á instancia de parte la comunicacion ni reconocimiento general de los mismos, sino en los juicios de sucesion universal, liquidacion de compañía, ó de quiebra. Solo es permitida la exhibicion para la compulsa de lo que tenga relacion con la cuestion que se ventile, en caso de pleito, debiendo hacerse el reconocimiento á presencia del dueño de los libros, ó de persona comisionada por el mismo, y sin poderse exigir para ello la traslacion de estos al lugar del juicio, cuando se hallen fuera de la residencia del tribunal (arts. 49, 50, 51 y 52).

El comerciante que omita en su contabilidad alguno de los libros, que se prescriben como necesarios, ó que los oculte cuando se le mande su exhibicion conforme á derecho, incurre, por cada libro que dejare de llevar, en una multa de seis mil á treinta mil reales; y en caso de controversia, será juzgado por los asientos de los libros de su adversario, siempre que estos se encuentren arreglados, sin admitírsele prueba en contrario (art. 45).

Y además, en caso de quiebra, se reputa esta fraudulenta ó de cuarta clase por el hecho de no haber llevado los libros de contabilidad que están prevenidos, ó de haberlos ocultado el comerciante que se declare en ese estado, ó haber introducido en ellos partidas que no se sentaron en el lugar y tiempo oportuno; y de tercera clase, por no haberlos llevado en la forma y con todos los requisitos prevenidos (arts. 1006 y 1007). Véase QUIEBRA.

FIN DEL TOMO XII.

ADVERTENCIA. *Deben encuadernarse á continuacion los quince pliegos que contienen el* ÍNDICE *de los tomos I al XII inclusive. Desde el XIII en adelante, cada tomo llevará su índice particular.*

INDICE GENERAL.

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

DE

DERECHO Y ADMINISTRACION,

Ó

Nuevo Teatro Universal de la Legislacion

DE ESPAÑA E INDIAS.

POR

D. Lorenzo Arrazola.

D. Pedro Sainz Andino.
D. Vicente Valor.
D. José Romero Giner.
D. Pedro Gomez de la Serna.
D. Joaquin José Casaus.
D. Joaquin Aguirre.
D. Miguel Puche y Bautista.
D. Mariano Antonio Collado.
D. Ruperto Navarro Zamorano.
D. Fernando Alvarez.
D. José de Mesa.
D. Cirilo Alvarez Martinez.

Indocti discant, et ament meminisse periti.

MADRID.
IMPRENTA DE DIAZ Y COMPAÑIA,
Plazuela del Duque de Alba, núm. 4.

1852.

INDICE GENERAL

DE LOS ARTICULOS CONTENIDOS

EN LA ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACION.

A.

	TOM.	PAG.
A.	I	1
ABACERIAS.	»	2
ABACIAL.	»	3
ABAD.		
Sumario.		
SEC. I. Etimología de la palabra y orígen del título de abad. . .	»	3
SEC. II. Diversas especies de abades. . . .	»	4
SEC. III. Eleccion, confirmacion y bendicion de los abades. . .	»	6
§. 1.° Eleccion.	»	6
§. 2.° Confirmacion. . . .	»	8
§. 3.° Bendicion	»	9
SEC. IV. Autoridad y atribuciones de los abades.	»	9
SEC. V. Distinciones, preeminencias y atribuciones especiales de los abades.	»	10
SEC. VI. Obligaciones y prohibiciones de los abades.	I	11
SEC. VII. Duracion del cargo de abad.	»	13
SEC. VIII. Abades comendatarios.	»	13
ABADENGO.	»	14
ABADESA.		
Sumario.		
SEC. I. Definicion y origen del título de abadesa.	»	15
SEC. II. Eleccion, bendicion y confirmacion de la abadesa. . . .	»	15
SEC. III. Autoridad y atribuciones de la abadesa.	»	16
ABADIA.	»	17
ABADIA.	»	18
ABANDERADO.	»	20
ABANDERIZAR.	»	20
ABANDONO.	»	21

	TOM.	PAG.
ABANDONO DE PERSONAS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	I	21
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	21
Legislacion extranjera. . . .	»	22
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Fundamento de la penalidad en el abandono de personas.	»	22
ABANDONO DE COSAS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	23
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	23
Disposiciones posteriores. . .	»	24
Legislacion extranjera. . . .	»	25
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Fundamento del abandono de cosas y sus efectos. . . .	»	25
ABANDONO DE COSAS ASEGURADAS.	»	27
ABANDONO DE NAVE. . . .	»	27
ABANDONO DE MINAS. . .	»	27
ABANDONO DE ESCORIALES Y DE TERRERAS O DEPOSITOS DE MINERALES NO FUNDIDOS. .	»	27
ABANDONO DE OFICINAS DE BENEFICIO.	»	27
ABANDONO DE DERECHOS.	»	27
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	27
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Fundamento del abandono de derechos y de su penalidad en ciertos casos.	»	28
ABANDONO MILITAR. . . .	I	28
ABANDONO DE BENEFICIOS ECLESIASTICOS. .	»	31
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	31
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	31
Derecho canónico.	»	32
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Especies del abandono de beneficios.	»	32
ABANDONO AL BRAZO SECULAR.	»	32
ABANDONO DE RELIGION Y APOSTASIA.	»	33
ABASTECEDORES.	»	33
ABASTOS.	»	33
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	33
Disposiciones posteriores. . . .	»	34
Leyes de Indias.	»	38
Legislacion extranjera. . . .	»	38
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	39
SEC. II. Abastos, sus clases y pueblos en que pueden establecerse estancos de los arrendables. . .	»	45
SEC. III. Arrendamientos de los abastos. . . .	»	45
§. 1.° Formalidades anteriores á las subastas. .	»	45
§. 2.° Formalidades con que deben hacerse las subastas.	»	46
§. 3.° Autoridad á quien compete la aprobacion de los espedientes de subastas y sus incidencias. .	»	46

	TOM.	PAG.
§. 4.° Deberes y derechos de los abastecedores obligados. . .	I	46
SEC. IV. Policía de abastos.	»	47
§. 1.° Salubridad de las subsistencias.	»	47
§. 2.° Exactitud de los pesos y medidas. . . .	»	48
§. 3.° Orden y aseo de las plazas de abastos, de los mataderos, alhóndigas y mercados.	»	48
ABDICACION.		
Sumario.		
SEC. I. Etimología de esta palabra.	»	49
SEC. II. §. 1.° Abdicacion en el sentido histórico y político.	»	50
§. 2.° Abdicacion en los gobiernos absolutos y en los gobiernos representativos. . . .	»	52
SEC. III. Varias cuestiones políticas relativas á la abdicacion. . .	»	53
SEC. IV. Doctrinas y reglas para la mejora y la legislacion política en materia de abdicacion	»	56
SEC. V. §. 1.° Abdicacion de dignidades y cargos públicos	»	73
§. 2.° Id. de la familia. . .	»	74
§. 3.° Id. de estado. . . .	»	75
§. 4.° Id. de la patria. . .	»	75
ABEJAR.	»	77
ABEJAS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo	»	78
Id. de las Partidas.	»	78
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Diferentes aspectos bajo los que considera la legislacion á las abejas.	I	78
SEC. II. Adquisicion y pérdida de la propiedad de las abejas.	»	79
ABERTURA.	»	81
ABIGEATO.	»	81
ABIGEO.	»	82
AB-INTESTATO.	»	82
AB-IRATO.	»	82
ABJURACION.	»	82
ABJURAR.	»	82
ABOGADO.	»	82
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	83
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	85
Disposiciones posteriores. . .	»	91
Leyes especiales.	»	99
Leyes de Indias.	»	100
Leyes canónicas.	»	103
Legislacion estranjera. . . .	»	103
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	106
SEC. II. Importancia social de la abogacía. .	»	112
SEC. III. Condiciones exijidas por las leyes para ejercer esta profesion	»	118
§. 1.° Estudios y licenciatura	»	119
§. 2.° Edad.	»	121
§. 3.° Juramento.	»	122
§. 4.° Incorporacion. . . .	»	123
SEC. IV. Prohibiciones é incompatibilidades en el ejercicio de la abogacía. . . .	»	124
SEC. V. Derechos y prerogativas de los abogados.	»	127
§. 1.° Defender de palabra y por escrito. . .	»	128

	TOM.	PAG.
§. 2.° Libertad en el desempeño de la profesion.	I	129
§. 3.° Hablar cubiertos. . .	»	133
§. 4.° Suplir en las funciones de la magistratura.	»	134
§. 5.° Derechos políticos. .	»	134
§. 6.° Honorarios.	»	135
SEC. VI. Deberes y obligaciones del abogado.	»	138
§. 1.° Deberes prescritos por las leyes.	»	138
§. 2.° Deberes que se deriban inmediatamente de su profesion. . . .	»	145
SEC. VII. De la disciplina de los abogados. . .	»	146
ABOGADO CONSULTOR. .	»	151
ABOGADO DEFENSOR. . .	»	152
ABOGADO DEL DIABLO.	»	152
ABOGADO DE DIOS. . . .	»	152
ABOGADO FISCAL. . . .	»	153
ABOGADO DE POBRES. .	»	153
ABOGAR.	»	153
ABOLENGO, ABOLONGO O ABOLORIO.	»	153
ABOLICION.	»	154
ABOLICIONISTAS. . . .	»	155
ABOLIR.	»	155
ABONADOR.	»	155
ABONADORES DE RENTAS PUBLICAS.	»	155
ABONAR.	»	155
ABONARÉ	»	156
ABONO.	»	156
ABORDAJE.		
PARTE LEGISLATIVA.	»	158
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Diferentes especies de abordaje y sus efectos. . : . .	»	158
ABORTIVO.	»	160
ABORTIVO (HIJO). . . . . :	»	160
ABORTO.	»	160

	TOM.	PAG.
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo. . . .	I	161
Id. de las Partidas.	»	161
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	161
Legislacion estranjera. . . .	»	162
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Distincion entre el aborto natural ó espontáneo, y el voluntario ó procurado.	»	162
SEC. II. Condiciones exijidas por el derecho para que los hijos sean considerados nacidos vivos y no abortivos.	»	163
§. 1.° Que nazca vivo todo.	»	165
§. 2.° Que sea viable. . .	»	165
§. 3.° Que viva 24 horas al menos despues de nacer.	»	167
§. 4.° Que sea bautizado. .	»	169
SEC. III. Efectos civiles que produce el nacimiento de los hijos que se consideran nacidos vivos y de los abortivos. . .	»	170
ABREVADERO, ABREVAR.		
Sumario.		
SEC. I. Consideraciones generales.	»	171
SEC. II. Deberes de la administracion pública con relacion á los abrevaderos. .	»	173
ABREVIACION, V. ABREVIATURA. . . . . . :	»	176
ABREVIADOR, ABREVIADORES. . . . : . . : . .	»	176
ABREVIADURIA.	»	177
ABREVIAR.	»	177
ABREVIATURA.	»	177

	TOM.	PAG.
ABRIR LA MATRICULA. . .	I	180
ABRIR LAS NEGOCIACIONES.	»	180
ABRIRSE LAS VELACIONES.	»	180
ABRIR EL CONCURSO. . . .	»	181
ABROGACION.	»	181
ABSOLUCION.	»	181
ABSOLUCION DE LA DEMANDA.	»	181
ABSOLUCION DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO CIVIL.	»	182
ABSOLUCION LIBREMENTE Y SIN COSTAS. . . .	»	182
ABSOLUCION DEL CARGO.	»	182
ABSOLUCION DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO CRIMINAL.	»	182
ABSOLUCION EN DERECHO CANONICO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de Partidas.	»	182
Id. de Novísima Recopilacion. .	»	183
Recopilacion de Indias. . . .	»	184
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De la absolucion canónica en general.	»	184
SEC. II. De la absolucion judicial.	»	184
SEC. III. De la absolucion penitencial y de sus especies.	»	185
§. 1.° De la absolucion sacramental ó en el fuero interno. . .	»	185
§. 2.° De la absolucion en el fuero externo. .	»	186
§. 3.° Diferentes especies de absolucion en el fuero externo. . .	»	187
ABSOLUCION PRIVADA Y SOLEMNE.	»	189

	TOM.	PAG.
ABSOLUTISMO.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Del absolutismo con relacion á las diferentes formas de gobierno.	I	190
§. 1.° Exámen del gobierno absoluto bajo la forma poligárquica. .	»	191
§. 2.° Exámen del gobierno absoluto bajo la forma monárquica. . .	»	192
ABSOLUTISTA.	»	195
ABSOLUTORIO.	»	195
ABSOLVER.	»	195
ABSOLVER POSICIONES.	»	195
ABSTEMIO.	»	195
ABUELA.	»	195
ABUELA (RENTA DE LA). . . .	»	195
ABUELO.	»	196
ABUELOS.	»	196
ABUSO.		
Sumario.		
SEC. I. Etimología y esplicacion genérica de esta palabra. . .	»	197
SEC. II. Abuso considerado en el sentido moral.	»	198
SEC. III. Abuso en el sentido legal.	»	199
ABUSO DE AUTORIDAD.		
Sumario.		
SEC. I. Ideas generales relativas al abuso de autoridad. . . .	»	200
SEC. II. Abuso de las funciones que tienen mas inmediata relacion con la política. . .	»	202
SEC. III. Abuso de las funciones que corresponden mas particularmente á la administracion general.	»	205
SEC. IV. Abuso de las atribu-		

TOM. PAG.

ciones que son propias y peculiares de la administracion de justicia. . I 211

ABUSO DE CONFIANZA.

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

Leyes de las Partidas. . . . . » 213
Código penal . . . . . » 214
Legislacion extranjera. . . . . » 214

PARTE DOCTINAL.

Sumario.

Sec. I. Del abuso de confianza que cometen los que en perjuicio de otro se apropian ó distraen dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comision, administracion, ó por otro título, que produzca obligacion de entregarla ó devolverla. . . . . » 216

§. 1.° Caracteres generales de estas especies de abuso. . . . . » 216

§. 2.° Del abuso de confianza en el depósito. . » 220

§. 3.° Del abuso de confianza en el desempeño de una comision ó administracion, ó sea en el mandato. » 222

§. 4.° Del abuso de confianza que se comete con motivo de haber recibido dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble por el estilo, que produzca obligacion de entregarla ó devolverla. . . . . I 224

Sec. II. Abuso de firma en blanco. . . . . » 229

Sec. III. Abuso que cometen los que sustraen, ocultan ó inutilizan en todo ó en parte algun proceso, expediente, documento ú otro papel de cualquiera clase. . . . . » 231

Sec. IV. Abuso de la impericia ó pasiones de un menor. . . . » 233

ACADEMIA. . . . . . » 234

ACADEMIA ESPAÑOLA. . » 238

ACADEMIA DE LA HISTORIA. . . . . . » 239

ACADEMIA DE LAS NOBLES ARTES, INTITULADA DE SAN FERNANDO. . . . . . » 241

ACADEMIA DE LAS TRES NOBLES ARTES DE VALENCIA, CON EL TITULO DE S. CARLOS. . . . » 244

ACADEMIA DE LAS TRES NOBLES ARTES DE ZARAGOZA, BAJO EL TITULO DE S. LUIS. . . . » 245

ACADEMIA DE MATEMATICAS Y NOBLES ARTES DE VALLADOLID, CON EL TITULO DE LA PURISIMA CONCEPCION. . . . . . » 245

ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA. . . . . . » 245

ACADEMIA GRECO-LATINA. . . . . . » 247

ACADEMIA DE CIENCIAS ECLESIASTICAS DE S. ISIDORO. . . . . . » 248

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION. . . . . . » 248

	TOM.	PAG.
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA TEORICO-PRACTICA DE LA HABANA	I	250
ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES	»	250
ACADEMIA REAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES	»	251
ACADEMIA DE MAESTROS DE PRIMERA EDUCACION	»	251
ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y ARTES DE BARCELONA	»	251
ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA	»	252
ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE SEVILLA	»	252
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE CADIZ	»	252
ACADEMICO	»	252
ACADEMICO (FUERO)	»	252
ACAMPO	»	252
ACASO	»	252
ACAUDILLAR	»	253
ACCESION.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas	»	253
Legislacion estranjera	»	253
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. De la naturaleza de la accesion y de sus especies	»	253
§. 1.° De la accesion natural	»	255
§. 2.° De la accesion industrial	»	257
§. 3.° De la accesion mista	»	261
ACCESION CONTINUA	»	262
ACCESION DISCRETA	»	262
ACCESION	»	262
ACCESO	»	263
ACCESORIAS	»	262
ACCESORIO.		
Sumario.		
SEC. I. Principios generales sobre lo accesorio	I	263
SEC. II. De lo accesorio en lo civil	»	264
§. 1.° De lo accesorio en la propiedad	»	264
§. 2.° De lo accesorio en la hipoteca	»	265
§. 3.° De lo accesorio en la servidumbre	»	266
§. 4.° De lo accesorio en los contratos	»	266
§. 5.° De lo accesorio en las ventas	»	266
§. 6.° De lo accesorio en los legados	»	267
SEC. III. De lo accesorio en criminal	»	268
ACCIDENTE	»	270
ACCIDENTAL	»	271
ACCION.		
Sumario.		
SEC. UNICA. De las acciones humanas	»	271
§. 1.° Del sujeto de las acciones humanas	»	272
§. 2.° De la diferencia intrínseca de las acciones humanas	»	273
§. 3.° Del principio de la imputabilidad de las acciones humanas	»	275
§. 4.° De la diversidad específica de las acciones humanas	»	278
ACCION JURIDICA	»	279
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica	»	281
SEC. II. De la naturaleza y division de las acciones	»	294
§. 1.° De las acciones reales-muebles, inmue-		

	TOM.	PAG.
bles-petitorias-posesorias.	I	298
§. 2.° De las acciones personales-civiles, criminales—públicas, privadas. . . : .	»	302
§. 3.° De las acciones mistas.	»	308
SEC. III. Del ejercicio de las acciones.	»	313
§. 1.° Interés.	»	313
§. 2.° Derecho.	»	314
§. 3.° Capacidad legal. . .	»	315
SEC. IV. De los efectos y extincion de las acciones.	»	316
ACCION DE COMPAÑIA. .	»	317
ACCION DE CONDUCCION.	»	321
ACCION CONFESORIA. . .	»	321
ACCION DE COMODATO (DIRECTA).	»	321
ACCION DE COMODATO (CONTRARIA).	»	321
ACCION DE COMPRA. . .	»	321
ACCION DE DEPOSITO (DIRECTA).	»	321
ACCION DE DEPOSITO (CONTRARIA).	»	321
ACCION DE DAÑOS CAUSADOS POR LO QUE SE DERRAMA, ARROJA O SUSPENDE EN UN PARAJE PUBLICO, O POR DONDE TRANSITA LA GENTE.	»	321
ACCION DE DIVISION DE COSA COMUN.	»	321
ACCION DE DESLINDE DE TÉRMINOS COMUNES. .	»	321
ACCION EJECUTIVA. . .	»	321
ACCION ESTIMATORIA O DEL CUANTO MENOS. . .	»	322
ACCION ENFITEUTICARIA.	»	322
ACCION EXERCITORIA. .	»	322
ACCION HIPOTECARIA. .	»	322
ACCION INSTITORIA. . .	»	322
ACCION INTERROGATORIA.	»	322
ACCION DE LOCACION. .	I	322
ACCION DE LA LEY AQUILIA.	»	322
ACCION DE MANDATO (DIRECTA).	»	323
ACCION DE MANDATO (CONTRARIA).	»	323
ACCION DE MUTUO. . . .	»	323
ACCION NEGATORIA. . .	»	323
ACCION NOXAL.	»	323
ACCION ORDINARIA. . .	»	323
ACCION PAULIANA. . . .	»	323
ACCION PETITORIA. . .	»	323
ACCION PIGNOTATICIA (DIRECTA)	»	323
ACCION PIGNORATICIA (CONTRARIA).	»	324
ACCION POPULAR.	»	324
ACCION POSESORIA. . .	»	324
ACCIONES PREJUDICIALES. . . . . . : . . .	»	324
ACCION PRO-SOCIO. . . .	»	324
ACCION PUBLICIANA. . .	»	324
ACCION REDHIBITORIA.	»	324
ACCION RESCISORIA. . .	»	324
ACCION REVINDICATORIA.	»	324
ACCION SERVIANA. . . .	»	324
ACCION CUASI SERVIANA.	»	325
ACCION DE VENTA. . . .	»	325
ACCION EXHIBITORIA.	»	325
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	325
Legislacion estranjera.	»	326
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. ÚNICA. A quien compete y contra quien. . .	»	326
ACCIONISTA.	»	328
ACENSUAR.	»	328
ACEÑA.	»	328
ACEPCION DE PERSONAS	»	328
ACEPTACION DE PERSONAS. . . . . . :	»	328

	TOM.	PAG.
ACEPTACION DE UNA HERENCIA.	I	328
ACEPTACION DE DONACION.	»	328
ACEPTACION DE LEGADO.	»	328
ACEPTACION DE UNA LETRA DE CAMBIO.	»	329
ACEPTANTE.	»	329
ACEPTAR.	»	329
ACEPTAR LA HERENCIA A O CON BENIFICIO DE INVENTARIO.	»	329
ACEPTILACION.	»	329
ACEQUIA.	»	331
ACERVO.	»	333
ACETABULO.	»	333
ACLAMACION-ACLAMAR.	»	333
ACLAMACION.	»	334
ACLARACION.	»	334
ACLARAR.	»	335
ACOGEDOR.	»	335
ACOGER.	»	335
ACOGERSE.	»	335
ACOGIDO.	»	335
ACOLITO.	»	335
ACOMODAMIENTO.	»	336
ACOMPAÑADO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	336
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	336
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Condiciones que debe llenar el acompañado y forma de proceder en el desempeño de su cometido.	»	337
ACOMPAÑARSE.	»	340
ACONSEJADOR.	»	340
ACONSEJAR.	»	341
ACOPIOS.	»	341
ACORDADA.	»	341
ACORDADO.	»	341
ACORDAR.	»	341
ACOSTAMIENTO.	I	341
ACOTADO, ACOTAMIENTO, ACOTAR.	»	342
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Novísima Recopilacion.	»	343
Disposiciones posteriores.	»	334
Legislacion estranjera.	»	347
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	348
SEC. II. Ideas generales y modo de proceder en los acotamientos y cerramientos de heredades.	»	354
SEC. III. Estension y efectos de la facultad concedida en el decreto de 8 de junio de 1813.	»	356
SEC. IV. Dificultades á que dá lugar el estado de la legislacion relativa á acotamientos y cerramientos de tierra, y reglas que podrian adoptarse para resolverlas y fijar definitivamente la legislacion en esta materia.	»	359
ACRECENCIA, ACRECIMIENTO, DERECHO DE ACRECER.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	364
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	364
Legislacion estranjera.	»	364
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Naturaleza y funda-		

	TOM.	PAG.
mento del derecho de acrecer. . .	I	367
SEC. II. Circunstancias necesarias para el derecho de acrecer.	»	369
SEC. III. Cómo se verifica el derecho de acrecer entre los colegatarios.	»	370
ACRECER EN LOS CABILDOS.	»	371
ACRECENTADO.	»	371
ACREDITADO.	»	371
ACREEDORES.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	372
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	375
Código de comercio.	»	376
Legislacion extranjera. . . .	»	378
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De los acreedores en general, y fundamento de sus derechos.	»	381
SEC. II. De los acreedores reales y personales, y sus diferencias.	»	381
SEC. III. Diferentes especies de acreedores reales.	»	383
§. 1.° Acreedores de dominio.	»	383
§. 2.° Acreedores pignoraticios.	»	386
§. 3.° Acreedores hipotecarios.	»	387
SEC. IV. De los acreedores personales. . . .	»	393
SEC. V. De los acreedores privilegiados y no privilegiados. Carácter del privilegio.	I	394
SEC. VI. De los acreedores hereditarios y testamentarios. . . .	»	395
SEC. VII. Graduacion y órden de preferencia de los acreedores. . .	»	396
§. 1.° Acreedores singularmente privilegiados. — Clase 1.ª. .	»	397
§. 2.° Acreedores hipotecarios privilegiados.— Clase 2.ª.	»	401
§. 3.° Acreedores hipotecarios simples.—Clase 3.ª.	»	409
§. 4.° Acreedores personales privilegiados.— Clase 4.ª.	»	410
§. 5.° Acreedores meramente personales ó comunes.—Clase 5.ª.	»	410
SEC. VIII. De los acreedores mercantiles. . .	»	411
§. 1.° Acreedores de dominio.	»	412
§. 2.° Acreedores hipotecarios.	»	414
§. 3.° Acreedores escriturarios y comunes. . .	»	416
SEC. IX. De los derechos de los acreedores. .	»	417
§. 1.° Derecho de vender los bienes del deudor.	»	417
§. 2.° Derecho de revocar los actos cometidos en fraude suyo. . .	»	418
§. 3.° Derecho de subrogarse los unos en lugar de los otros. . . .	»	422
ACREEDORES DEL ESTADO.	»	423
ACREEDORES (concurso de).	»	424
ACRIMINACION.	»	424
ACRIMINAR.	»	424

	TOM.	PAG.
ACTA.	I	424
ACTAS DE NAVEGACION.		
Sumario.		
Sec. I. Actas de navegacion mas notables. . .	»	426
§. 1.° Acta de navegacion de Inglaterra.	»	426
§. 2.° Acta de navegacion de Francia.	»	528
§. 3.° Acta de navegacion de los Estados-Unidos.	»	429
Sec. II. Disposiciones análogas de otros paises.	»	429
§. 1.° Portugal.	»	430
§. 2.° Austria	»	430
§. 3.° Suecia.	»	430
§. 4.° Rusia.	»	431
§. 5.° España.	»	431
Sec. III. Crítica de los principios en que se fundan todas estas legislaciones. . . .	»	435
ACTIVA (ADMINISTRACION). .	»	436
ACTIVO.	»	436
ACTIVO.	»	436
ACTIVO.	»	437
ACTIVOS.	»	437
ACTO.	»	438
ACTO.	»	438
ACTO.	»	438
ACTOR.	»	439
ACTOR.	»	440
ACTORA (PARTE). . . .	»	440
ACTOR EGECUTANTE. .	»	440
ACTOR EN CAUSA PROPIA.	»	440
ACTOS ADMINISTRATIVOS	»	440
ACTOS ARBITRARIOS. .	»	446
ACTOS CIVILES.	»	446
ACTOS DE BUENA FE. . .	»	446
ACTOS DE COMUN ACUERDO.	»	448
ACTOS DE COMERCIO O MERCANTILES.	I	448
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Código de comercio.	»	448
Legislacion estranjera. . . .	»	449
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Introduccion histórica.	»	451
Sec. II. Carácter distintivo de los actos de comercio.—Su clasificacion.	»	452
§. 1.° Actos que se consideran de comercio, sean ó no comerciantes los que los ejecutan.	»	454
§. 2.° Actos que no se consideran de comercio si las personas que lo ejecutan, ó alguna de ellas, no tienen la calidad de comerciantes. . . .	»	458
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA. . .	»	459
ACTOS DE JURISDICCION CONTENCIOSA. .	»	459
ACTOS DE HEREDERO.	»	459
ACTOS DE RIGOROSO DERECHO.	»	460
ACTOS ECLESIASTICOS.	»	460
ACTOS INMORALES. . . .	»	461
ACTOS ILEGALES. . . .	»	461
ACTOS INTERNOS.—EXTERNOS.	»	461
ACTOS PUBLICOS.—PRIVADOS.	»	462
ACTOS JUDICIALES. . . .	»	462
ACTOS ESTRAJUDICIALES.	»	462
ACTOS LEJITIMOS. . . .	»	463
ACTOS NEGATIVOS. . . .	»	463
ACTOS POSESORIOS. . .	»	464

	TOM.	PAG.
ACTOS POSITIVOS. . . .	I	464
ACTOS PUBLICOS.	»	464
ACTUACION.	»	467
ACTUACIONES.	»	467
ACTUAR.	»	467
ACTUARIO.	»	467
ACUERDO.	»	467
ACUMULACION.	»	467
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	468
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	468
Legislacion estranjera. . . .	»	468
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. De la acumulacion de acciones. . .	»	469
§. 1.° De la acumulacion de acciones en lo civil.	»	469
§. 2.° De la acumulacion de acciones en lo criminal.	»	471
§. 3.° Del tiempo en que pueden acumularse las acciones. . . .	»	472
Sec. II. De la acumulacion de autos y procesos.	»	473
§. 1.° Causas que dan lugar á la acumulacion de autos y procesos. .	»	473
§. 2.° Modo de proceder en este recurso. . . .	»	476
§. 3.° Efectos que produce la acumulacion de autos y procesos. .	»	478
ACUÑACION DE MONEDA, ACUÑAR MONEDA. . . .	»	479
ACUSACION.	»	479
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo	»	480
Id. de las Partidas.	»	480
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	484
Disposiciones posteriores. . .	I	484
Código penal	»	489
Recopilacion de las leyes de Indias.	»	489
Ordenanzas generales de ejército.	»	489
Derecho canónico.	»	490
Legislacion estranjera. . . .	»	491
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. De la acusacion en general.	»	495
Sec. II. De la acusacion pública y privada. .	»	497
Sec. III. Personas que pueden acusar. . . .	»	503
Sec. IV. Personas que pueden ser acusadas.	»	509
Sec. V. Ejercicio del derecho de acusar. .	»	513
Sec. VI. Penas contra los falsos acusadores.	»	518
Sec. VII. Forma práctica de la acusacion. . .	»	519
ACUSADO	»	520
ACUSADOR.	»	520
ACUSAR.	»	520
ACUSAR EL RECIBO. . .	»	520
ACUSAR REBELDIA. . . .	»	520
ADARCON Y DARCHEMON.	»	520
ADARME.	»	520
ADELANTADO.	»	520
ADEUDO.	»	523
ADHERIRSE A LA APELACION.	»	523
ADHESION.	»	523
ADICION O ADICION IN DIEM.	»	524
ADICIONAL.	»	524
ADIR UNA HERENCIA. .	»	524
ADIVINO.	»	524
ADJUDICACION, ADJUDICAR.	»	525
ADJUDICACION EN PAGO.	»	525
ADJUDICACION FORZADA.	»	525

	TOM.	PAG.
ADJUDICATORIO.	I	526
ADJUNTO.	»	526
ADMINISTRACION, ADMINISTRAR.	»	526
ADMINISTRACION PUBLICA.	»	527
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Idea general de la administracion. .	»	527
SEC. II. Instrumento y materia de la administracion. . . .	»	531
SEC. III. Accion administrativa y judicial comun.	»	533
SEC. IV. De la accion administrativa propiamente dicha. . .	»	535
§. 1.° Accion ilustrada. . .	»	539
§. 2.° Accion justa. . . .	»	540
§. 3.° Administracion activa y administracion contenciosa. . . .	»	541
SEC. V. Organizacion administrativa de España.—Nociones generales.	»	542
§. 1.° Administracion central.	»	546
§. 2.° Administracion provincial.	»	549
§. 3.° Administracion de distrito.	»	552
§. 4.° Administracion local.	»	553
§. 5.° Conclusion.	»	554
ADMINISTRACION DE HACIENDA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Reales decretos.	»	555
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica de la administracion de Hacienda. . .	I	563
SEC. II. Materia de la administracion de Hacienda, ú objetos sobre que recae.	»	578
§. 1.° Propiedades del Estado.	»	578
§. 2.° Regalías y monopolios.	»	579
§. 3.° Contribuciones. . .	»	579
§. 4.° Crédito público. . .	»	580
SEC. III. Organizacion de la administracion de Hacienda. . . .	»	580
§. 1.° Administracion superior y central de Hacienda.	»	580
§. 2.° Administracion provincial y de partido.	»	582
SEC. IV. Administracion especial de Ultramar.	»	583
ADMINISTRACION MILITAR.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones anteriores á la Recopilacion.	»	584
Disposiciones posteriores á la Recopilacion.	»	589
Legislacion estranjera. . . .	»	596
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	597
SEC. II. Objetos que comprende la administracion militar. . .	»	605
§. 1.° Sueldos, prest y gratificaciones.	»	605
§. 2.° Víveres de hombres y caballos.	»	606
§. 3.° Vestuario y equipo. .	»	606
§. 4.° Armamento.	»	606
§. 5.° Remonta.	»	606

	TOM.	PAG.
§. 6.° Alojamientos y cuarteles.	I	607
§. 7.° Utensilios.	»	608
§. 8.° Trasportes y convoyes.	»	608
§. 9.° Hospitales.	»	608
§. 10. Fortificaciones. . . .	»	609
§. 11. Material de artilleria.	»	609
§. 12. Administracion en campaña.	»	609
Sec. III. Organizacion de la administracion militar.	»	610
§. 1.° Intendencia general. .	»	613
§. 2.° Intervencion general.	»	614
§. 3.° Pagaduria general. . .	»	616
§. 4.° Intendencias de distrito.	»	617
§. 5.° Intervenciones de distrito.	»	618
§. 6.° Pagadurías de distrito.	»	620
§. 7.° Comisarios de guerra.	»	621
Sec. IV. Administracion militar en Ultramar. .	»	624
ADMINISTRACION DE JUSTICIA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	625
Id. de las Partidas.	»	626
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	627
Disposiciones posteriores. . . .	»	627
Leyes de Indias.	»	630
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica. .	»	630
Sec. II. Observaciones teóricas sobre la administracion de justicia.	»	636
Sec. III. Consideraciones teórico-prácticas: principios de organizacion.	»	639
§. 1.° Del objeto de la administracion de justicia.	I	639
§. 2.° De los tribunales. . .	»	640
§. 3.° De los juicios.	»	644
§. 4.° Del poder judicial. . .	»	647
Sec. IV. De la administracion de justicia en España en la actualidad.	»	655
§. 1.° De la administracion de justicia en el fuero comun. . . .	»	656
§. 2.° De los fueros especiales.	»	662
Sec. V. De la administracion de justicia en Indias.	»	665
§. 1.° De la administracion de justicia en el fuero comun. . . .	»	666
§. 2.° De los fueros especiales.	»	667
Sec. VI. De la administracion de justicia en los consulados españoles en el estranjero.	»	670
Sec. VII. Ojeada retrospectiva sobre la administracion de justicia.	»	673
ADMINISTRACION.	»	680
ADMINISTRACION DE BIENES AJENOS SIN ORDEN NI CONOCIMIENTO DE SU DUEÑO.	»	682
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	682
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Naturaleza y orígen de este cuasi contrato.	»	684
Sec. II. Circunstancias que deben acompañar á este cuasi contrato, para que pro-		

	TOM.	PAG.
duzca efectos legales.	I	685
§. 1.° Que la administracion verse sobre cosa ó negocio de otro. .	»	686
§. 2.° Que la administracion se verifique sin mandato ni consentimiento del dueño.	»	688
Sec. III. Acciones que nacen de este cuasi contrato..	»	688
§. 1.° Accion directa. . . .	»	688
§. 2.° Accion contraria. . .	»	689
ADMINISTRACION DE COSA COMUN.	»	689
ADMINISTRACION JUDICIAL.	»	690
ADMINISTRACION DE MAYORAZGO.	»	690
ADMINISTRACION SOCIAL.	»	691
ADMINISTRACION DE TUTELA O CURADURIA. . .	»	691
ADMINISTRADOR.	»	691
ADMINISTRADOR.	»	692
ADMINISTRADOR LEGITIMO.	»	692
ADMINISTRADOR DE ORDEN O ENCOMIENDA. . .	»	693
ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES.	»	693
ADMINISTRADOR VOLUNTARIO.	»	694
ADMINISTRADORES. . . .	»	694
ADMISION.	»	699
ADMISION.	»	700
ADMONICION.	»	700
ADMONICION.	»	700
ADOLESCENCIA.	»	700
ADOLESCENTE.	»	700
ADOPCION.	»	700
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	701
Legislacion estranjera.	I	703
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Origen y naturaleza de la adopcion y sus especies.. . .	»	704
Sec. II. Personas que pueden adoptar y ser adoptadas.	»	706
Sec. III. Formas de la adopcion.	»	709
Sec. IV. Efectos de la adopcion.	»	710
Sec. V. Arrogacion, y en qué se diferencia de la adopcion.. .	»	712
Sec. VI. Personas que pueden arrogar y ser arrogadas.. . . .	»	712
Sec. VII. Formas de la arrogacion.	»	713
Sec. VIII. Efectos de la arrogacion.	»	715
ADOPTAR.	»	715
ADOPTAR.	»	715
ADOPTIVO.	»	715
ADOPTADO.	»	715
ADOPTADOR O ADOPTANTE.	»	715
ADOR.	»	716
ADORACION..	»	716
ADQUIRIR.	II	5
ADQUIRENTE.	»	5
ADQUISICION..	»	5
ADQUISICION POR EL ESTADO..	»	9
ADUANAS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Ley de aduanas y reales decretos posteriores.	»	13
Legislacion estranjera.	»	25
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. Introduccion histórica.—Princi-		

	TOM.	PAG.
pios sobre las aduanas y bases mas principales de su organizacion.-Clasificacion de las aduanas.	II	32
SEC. I. Introduccion histórica.	»	32
SEC. II. Principios sobre las aduanas y bases mas principales de su organizacion. .	»	36
SEC. III. Clasificacion de las aduanas.	»	40
CAPITULO SEGUNDO. Del comercio en su relacion con las aduanas. .	»	41
SEC. I. Comercio de importacion.	»	41
§. 1.° Formalidades generales á que se halla sometido en las aduanas el comercio de importacion.	»	42
§. 2.° Formalidades especiales á la importacion por tierra.. .	»	49
§. 3.° Formalidades especiales á la importacion de nuestras posesiones de Ultramar.	»	50
SEC. II. Contraregistros. . .	»	50
SEC. III. Circulacion interior.	»	51
SEC. IV. Casos especiales del comercio de importacion.	»	52
§. 1.° Averías.	»	52
§. 2.° Abandono de mercaderías.	»	55
§. 3.° Arribadas, recaladas y naufragios. . . .	»	56
SEC. V. Comercio de esportacion.	»	57
§. 1.° Formalidades generales á que se halla sometido en aduanas el comercio de esportacion. . . .	II	57
§. 2.° Formalidades especiales al comercio de esportacion para nuestras posesiones de Ultramar. .	»	58
SEC. VI. Comercio de cabotage.	»	59
SEC. VII. Tránsitos.	»	63
SEC. VIII. Depósitos.	»	64
CAPITULO TERCERO. De la administracion de las aduanas.	»	68
SEC. I. Agentes principales de las aduanas.. .	»	68
§. 1.° Direccion general de aduanas y aranceles.	»	68
§. 2.° Intendentes.	»	70
§. 3.° Administradores. . .	»	70
§. 4.° Contador.	»	71
§. 5.° Tesoreros.	»	73
§. 6.° Vistas.	»	73
§. 7.° Alcaides..	»	74
§. 8.° Interventores. . . .	»	73
§. 9.° Guarda-almacenes de depósito.	»	75
§. 10. Pesadores.	»	76
§. 11. Marchamadores.. . .	»	76
SEC. II. Ausiliares de la administracion de aduanas.	»	76
§. 1.° Cónsules y vice-cónsules.	«	76
§. 2.° Resguardo marítimo..	»	77
§. 3.° Resguardo terrestre..	»	77
§. 4.° Vigías y torreros. . .	»	78
§. 5.° Junta de sanidad. . .	»	78
§. 6.° Inspector facultativo.	»	78
CAPITULO CUARTO. De los delitos y faltas en materia de aduanas y aranceles. . . .	»	78
SEC. I. Delitos.	»	78
SEC. II. Faltas.	»	78

	TOM.	PAG.
Sec. III. Procedimiento. . .	II	80
CAPITULO QUINTO. De las aduanas y aranceles de nuestras posesiones de Ultramar. .	»	80
Sec. I. Isla de Cuba. . . .	»	81
Sec. II. Puerto-Rico. . . .	»	87
Sec. III. Filipinas.. . . .	»	89
ADULA..	»	90
ADULACION (ADULAR.). . .	»	90
ADULTERAR.	»	91
ADULTERAR.	»	91
ADULTERINO.	»	91
ADULTERIO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo	»	92
Id. de las Partidas.	»	94
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	97
Código penal	»	98
Derecho canónico.	»	98
Legislacion estranjera. . . .	»	99
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales..	»	103
Sec. II. Naturaleza del delito de adulterio.. . .	»	110
Sec. III. Accion de adulterio.	»	114
§. 1.° A quiénes corresponde el derecho de acusar en el delito de adulterio.	»	115
§. 2.° Varias cuestiones sobre el ejercicio de la accion criminal de adulterio.. . .	»	118
Sec. IV. Escepciones que pueden oponerse á la accion de adulterio.	»	123
Sec. V. Pruebas.	»	127
Sec. VI. Efectos del adulterio.	»	130
ADULTEROS.	»	134
ADULTO..	II	154
ADVENEDIZO.	»	154
ADVENIMIENTO.	»	154
ADVENTAJAS O AVENTAJAS..	»	154
ADVENTICIO..	»	155
ADVENA..	»	155
ADVERACION.	»	155
ADVERSARIO, ADVERSO..	»	155
ADVIENTO.	»	156
AFECCION.	»	156
AFECCION.	»	156
AFECTAR.	»	156
AFECTO.	»	156
AFERIR, AFERICION. . .	»	157
AFIANZAMIENTO..	»	157
AFIANZAR.	»	157
AFIAR.	»	157
AFILIACION, AFILIARSE.	»	157
AFIN.	»	157
AFINIDAD..	»	157
AFORADO.	»	157
AFORADOR, AFORAR, AFORO.	»	157
AFORRADO, AFORRADOR, AFORRAMIENTO, AFORRAR.	»	158
AFRENTA.	»	158
AFRONTAR, AFRONTUAR.	»	159
AGAPE.	»	159
AGAPETAS.	»	140
AGENCIA.	»	140
AGENTE..	»	140
AGENTES ADMINISTRATIVOS.	»	140
AGENTES DE CAMBIOS.	»	141
AGENTES CONSULARES.	»	141
AGENTES DIPLOMATICOS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	142
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	142
Disposiciones posteriores. . .	»	146

	TOM.	PAG.
Legislacion estranjera. . . .	II	152
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	153
SEC. II. Del derecho y obligacion de las naciones sobre enviar y recibir agentes diplomáticos. .	»	155
SEC. III. Diferentes clases de misiones diplomáticas..	»	163
SEC. IV. Denominacion y clasificacion de los agentes diplomáticos: algunas cuestiones relativas al número y circunstancias de los mismos.	»	166
SEC. V. De las credenciales y demas títulos y documentos relativos al cargo ó mision del agente diplomático. . . .	»	172
SEC. VI. Prerogativas, derechos, autoridad y obligaciones de los agentes diplomáticos.	»	176
§. 1.° Inviolabilidad.. . . .	»	176
§. 2.° Independencia. . . .	»	178
§. 3.° Inmunidad..	»	187
§. 4.° Asilo.	»	189
§. 5.° Culto religioso. . . .	»	192
§. 6.° Honores.	»	194
§. 7.° Autoridad.	»	196
§. 8.° Deberes de los agentes diplomáticos. .	»	201
§. 9.° Tiempo en que empiezan y terminan las prerogativas del agente diplomático.	»	202
§. 10. Consideracion de los agentes diplomáticos en los paises respecto de los cuales no están acreditados..	II	202
SEC. VII. De la familia y dependientes del agente diplomático.	»	204
SEC. VIII. Cesacion de las misiones diplomáticas, y sus efectos.	»	206
SEC. IX. Ceremonial, rango y tratamiento. . .	»	210
SEC. X. Apéndice á las secciones anteriores sobre trasportes y salvo-conductos, y sobre varias clases de agentes intermediarios, á los cuales no corresponde en rigor carácter diplomático.	»	211
AGENTES FISCALES. . . .	»	214
AGENTE DE LA HACIENDA PUBLICA.	»	214
AGENTES DE INDIAS. . .	»	214
AGENTES DE NEGOCIOS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	215
Disposiciones posteriores. . .	»	217
Leyes de Indias.	»	218
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	219
SEC. II. Carácter distintivo del agente de negocios.	»	221
SEC. III. Personas que no pueden ser agentes de negocios.. . .	»	222

	TOM.	PAG.
Sec. IV. Obligaciones y derechos de los agentes de negocios. .	II	223
AGENTE DE PRECES. . .	»	224
AGENTES PROCURADORES.	»	231
AGENTES.	»	232
AGIO, AGIOTAGE, AGIOTISTA.	»	232
AGNACION.	»	233
AGNATICIO.	»	233
AGNATICIA LINEA.	»	233
AGNADO.	»	233
AGNUS DEI.	»	233
AGNUS DEI.	»	234
AGORERO.	»	234
AGRARIAS (LEYES).		
Sec. unica. Leyes agrarias de los romanos. . . .	»	234
AGRAVACION.	»	238
AGRAVANTE.	»	238
AGRAVAR.	»	238
AGRAVATORIO.	»	238
AGRAVIADO.	»	238
AGRAVIARSE.	»	238
AGRAVIO.	»	238
AGREGACION.	»	239
AGREGACION DE MAYORAZGO.	»	239
AGREGADO O AGREGADOS A EMBAJADA. . . .	»	239
AGRESION.	»	239
AGRESOR.	»	240
AGRICULTOR.	»	240
AGRICULTURA.	»	240
AGRIMENSOR.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica. .	»	241
Sec. II. De los agrimensores como ausiliares de la administracion general y de la de justicia.	»	243
Sec. III. Circunstancias y requisitos para ser agrimensor. . . .	»	244
Sec. IV. Disposiciones penales con relacion al desempeño del cargo de agrimensor.	II	246
AGRONOMO.	»	246
AGUA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	247
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	249
Disposiciones posteriores. . . .	»	249
Leyes de Indias.	»	253
Legislacion estranjera.	»	255
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Principios teóricos en materia de aguas.	»	299
§. 1.° Dominio.	»	300
§. 2.° Servidumbres. . . .	»	312
§. 3.° Deberes de la administracion general. .	»	316
Sec. II. Derecho positivo español en materia de aguas.	»	322
§. 1.° Dominio público de las aguas.	»	322
§. 2.° Dominio particular de las aguas (1). . .	»	293
§. 3.° Servidumbres de acueducto y otras. . .	»	300
§. 4.° Aplicacion de las aguas al riego. . . .	»	306
§. 5.° Aplicacion de las aguas á la maquinaria. .	»	315
§. 6.° Aplicacion de las aguas á los rios, al flote y navegacion. . .	»	318
§. 7.° Reglas que rigen en las concesiones de las aguas para sus diferentes empleos.	»	320

(1) Debe tenerse presente que desde la página 322 se equivocó la foliatura, siguiéndose la que comienza en la siguiente con el número 293.

	TOM.	PAG.
Sec. III. Jurisdiccion y competencia en negocios de aguas. . .	II	325
§. 1.° Reglas para determinar qué negocios y en qué estado corresponden á la administracion activa, á la contenciosa, ó á la jurisdiccion civil ordinaria.	»	326
§. 2.° Tribunales especiales que conocen de las infracciones que se cometen en el uso y aprovechamiento de las aguas. . .	»	331
Sec. IV. De las aguas consideradas con aplicacion á otros usos de comun utilidad.	»	333
§. 1.° Surtido de aguas á las poblaciones. . .	»	334
§. 2.° Cloacas, aguas inmundas y estancadas.	»	337
§. 3.° Aguas minerales. . .	»	339
§. 4.° Aguas saladas. . . .	»	344
AGUA.	»	345
AGUAS.	»	346
AGUA FRIA.	»	346
AGUA HIRVIENDO. . . .	»	347
AGUARDIENTE.	»	348
AGUERO.	»	350
AGUIJATORIO.	»	352
AGUILA.	»	352
AGUILA.	»	352
AHIJADO.	»	352
AHIJAMIENTO.	»	352
AHIJAR.	»	352
AHOGADO, AHOGAR. . .	»	352
AHORCADO.	»	353
AHORCADO EN ESTATUA.	»	353
AHORRAR, AHORRO. . .	»	353
AJOVAR, AXOVAR. . . .	»	353
AJUAR.	»	353
AJUSTADO.	»	353
AJUSTES DE CUERPOS. .	»	353
AJUSTICIADO, AJUSTICIAR.	II	353
ALABAR, ALABARSE. . .	»	355
ALABARDEROS.	»	355
ALAJOR.	»	356
ALAMIN.	»	356
ALAMINA.	»	356
ALARDES.	»	356
ALARDES EN LOS TRIBUNALES.	»	356
ALARIFE.	»	356
ALARMA.	»	356
ALAVA (FUERO DE). . . .	»	357
ALBACEA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	357
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	358
Código penal	»	358
Legislacion estranjera. . . .	»	359
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Introduccion histórica.	»	360
Sec. II. Carácter y naturaleza del cargo de albacea.	»	361
Sec. III. Especies de albaceas.	»	362
Sec. IV. Personas que no pueden ser albaceas.	»	364
Sec. V. Aceptacion del cargo de albacea y sus efectos.	»	367
Sec. VI. Facultades y derechos de los albaceas.	»	368
Sec. VII. Deberes de los albaceas.	»	372
Sec. VIII. Causas por que concluye el cargo de albacea y sus efectos.	»	374
ALBACEAZGO.	»	373

Lorenzo Arrazola

	TOM.	PAG.
ALBALA.	II	375
ALBAQUIA.	»	375
ALBARAN.	»	375
ALBEDRIO.	»	375
ALBEITAR.	»	375
ALBEITERADO.	»	376
ALBERGADOR, ALBERGAR, ALBERGUE, ALBERGUERIA.	»	376
ALBOROCO ALBOROQUE.	»	377
ALBOROTO.	»	377
ALBUFERA.	»	377
ALCABALA.	»	378
ALCABALATORIO. . . .	»	384
ALCABALERO.	»	384
ALCAHUETE, ALCAHUETERIA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo. . . .	»	385
Id. de las Partidas. . , . .	»	386
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	386
Código penal.	»	387
Legislacion estranjera. . . .	»	387
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Del delito de lenocinio ó alcahuetería y su penalidad.	»	388
ALCAIDE.	»	390
ALCAIDE DE ADUANA. .	»	392
ALCAIDE DE CARCEL.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	392
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	393
Disposiciones posteriores. . .	»	396
Código penal.	»	401
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Naturaleza y deberes anejos al cargo de los alcaides de las cárceles. . .	II	402
ALCAIDE DE LOS DONCELES.	»	404
ALCAIDIA.	»	404
ALCAIDIA.	»	404
ALCALDE.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	405
Disposiciones posteriores. . .	»	406
Leyes de Indias.	»	412
Legislacion estranjera. . . .	»	415
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	417
SEC. II. De los alcaldes, su eleccion y nombramiento, juramento y posesion.	»	424
SEC. III. Calidad y duracion del cargo de alcalde.	»	427
SEC. IV. Requisitos para ser alcalde, su capacidad, prerogativas.	»	428
SEC. V. Atribuciones de los alcaldes en el órden administrativo y económico. . .	»	428
§. 1.° Atribuciones de los alcaldes como delegados del gobierno.	»	429
§. 2.° Atribuciones de los alcaldes como administradores de los pueblos. . . .	»	438
§. 3.° Atribuciones de los alcaldes como presidentes de los ayuntamientos. .	»	445
SEC. VI. Atribuciones que		

	TOM.	PAG.
competen á los alcaldes en el órden judicial.	II	445
§. 1.° Jurisdiccion privativa de los alcaldes en los juicios de conciliacion.	»	446
§. 2.° Jurisdiccion privativa ó preventiva de los alcaldes en determinados juicios verbales.	»	449
§. 3.° Atribuciones judiciales de los alcaldes en los negocios civiles.	»	450
§. 4.° Atribuciones judiciales de los alcaldes en negocios criminales.	»	453
§. 5.° Atribuciones de los alcaldes que son comunes á todos los asuntos judiciales.	»	456
SEC. VII. Relaciones entre los alcaldes y otros delegados del gobierno, y entre los mismos y los jueces de primera instancia.	»	457
SEC. VIII. Suspension y destitucion de los alcaldes, y efectos de ellas. . . .	»	458
ALCALDE ALAMIN. . . .	»	459
ALCALDE DE ALZADAS.	»	460
ALCALDE DE BARRIO. .	»	460
ALCALDES DE BARRIO EN ULTRAMAR.	»	462
ALCALDES DE CASA Y CORTE.	»	462
ALCALDE-CORREGIDOR.	»	463
ALCALDES DEL CRIMEN.	»	464
ALCALDES DE LA CUADRA.	»	464
ALCALDE DE LA CUADRILLA.	II	464
ALCALDE DE CUARTEL.	»	464
ALCALDE DECANO. . . .	»	465
ALCALDES DE LA HERMANDAD.	»	465
ALCALDES DE HIJOS-DALGO.	»	467
ALCALDE DE INDIOS. .	»	467
ALCALDE LETRADO. . .	»	468
ALCALDE MAYOR. . . .	»	468
ALCALDE MAYOR EN ULTRAMAR.	»	470
ALCALDE MAYOR ENTREGADOR	»	473
ALCALDES DE LA MESTA.	»	473
ALCALDE DE NOCHE. . .	»	475
ALCALDE DE OBRAS Y BOSQUES.	»	475
ALCALDE ORDINARIO. .	»	475
ALCALDE ORDINARIO EN ULTRAMAR.	»	476
ALCALDE PEDANEO. . .	»	477
ALCALDE DE PROVINCIA.	»	479
ALCALDE PROVINCIAL. .	»	479
ALCALDE DEL RASTRO. .	»	479
ALCALDE DE REPESO. .	»	479
ALCALDE DE SACAS. . .	»	479
ALCALDE SEMANERO. .	»	480
ALCALDIA.	»	480
ALCANCES.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	480
Disposiciones posteriores. . .	»	480
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Observaciones generales. . . .	»	483
SEC. II. De la responsabilidad en materia de alcances de empleados. . . .	»	483
§. 1.° De la responsabilidad civil.	»	483
§. 2.° De la responsabilidad		

	TOM.	PAG.
penal.	II	487
Sec. III. De los tribunales que conocen en los asuntos relativos á alcances de empleados. . . .	»	488
ALCANTARA (orden de). . .	»	490
ALCANTARILLAS.	»	490
ALCANZADO.	»	490
ALCANZAR.	»	490
ALCIRA (acequia real de).	»	490
ALDEA.	»	490
ALDUIDES.	»	490
ALEATORIO.	»	491
ALEDAÑO.	»	492
ALEGACION.	»	492
ALEGAR.	»	493
ALEGATO.	»	493
ALENGUAMIENTO.	»	494
ALERA.	»	494
ALERA FORAL.	»	494
ALESOR.	»	495
ALEVOSIA.	»	495
ALFAQUEQUE.	»	497
ALFARDA, ALFARDON O ALFARDILLA	»	497
ALFARDERO.	»	497
ALFARRAZAR.	»	498
ALFEREZ.	»	498
ALFEREZ MAYOR DEL REY.	»	498
ALFEREZ MAYOR DE LOS PEONES O DE LA DIVISA.	»	498
ALFEREZ MAYOR DE CASTILLA.	»	498
ALFEREZ MAYOR DE CIUDAD O VILLA.	»	498
ALFEREZ.	»	499
ALFOLI.	»	499
ALFONSI.	»	499
ALFOZ.	»	499
ALGARA, ALGARADA. .	»	499
ALGO.	»	500
ALGUACIL.	»	500
ALGUACILES DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES.	II	501
ALGUACILES DE CAMPO.	»	503
ALGUACILES DE AYUNTAMIENTO.	»	503
ALGUACIL MAYOR. . . .	»	503
ALGODONES.	»	503
ALHAJA, ALHAJAS. . . .	»	503
ALHONDIGA.	»	505
ALHIJO.	»	505
ALIANZA.	»	505
ALIBI.	»	510
ALIFARA.	»	511
ALIMENTICIO.	»	511
ALIMENTISTA.	»	511
ALIMENTOS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	511
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	514
Legislacion estranjera.	»	514
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Fundamentos del derecho de alimentos.	»	518
Sec. II. Del derecho de alimentos y obligacion de prestarlos, fundados en las relaciones de familia.	»	519
§. 1.° De las personas que por relaciones de familia se deben alimentos. — Ascendientes y descendientes legítimos.—Id. naturales.—Id. adoptivos.—Cónyuges.—Colaterales.—Afines.	»	520
§. 2.° Naturaleza especial de la deuda alimenticia.	»	528
§. 3.° Estincion de la deuda		

	TOM.	PAG.
alimenticia. . . .	II	530
§. 4.° Procedimiento. . . .	»	531
§. 5.° Repeticion de los alimentos suministrados por un estraño.	»	534
Sec. III. Del derecho de alimentos y obligacion de prestarlos, nacidos de otros diferentes fundamentos. . . .	»	535
ALINDAMIENTO.	»	537
ALINDAR.	»	537
ALINDAR.	»	537
ALJAMA.	»	537
ALJARAFE.	»	537
ALJOFAR.	»	538
ALMACEN.	»	538
ALMACENAJE.	»	538
ALMADEN.	»	538
ALMADRABAS.		
Sumario.		
Sec. I. De las almadrabas en general y sus diferentes clases.	»	539
Sec. II. De la propiedad de las almadrabas. .	»	541
Sec. III. Del arrendamiento y del disfrute de las almadrabas.— Reglas que han de observarse para su concesion. . . .	»	542
Sec. IV. Obligaciones y derechos de los empresarios de almadrabas.	»	543
ALMIRANTAZGO, ALMIRANTE.	»	544
ALMOCATRACIA.	»	547
ALMOCEDA.	»	547
ALMOJARIFAZGO.	»	547
ALMOJARIFE.	»	548
ALMONEDA.	»	548
ALMOTACEN, ALMOTACENAZGO.	»	548
ALMUD.	II	550
ALMUDI.	»	551
ALODIAL, ALODIO. . . .	»	551
ALOGADO.	»	552
ALOGADOR.	»	552
ALOGUER, ALOGUERO. .	»	552
ALOGAMIENTO.	»	552
ALOGAR.	»	552
ALOJAMIENTO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	553
Disposiciones posteriores. . . .	»	553
Ordenanza general del ejército.	»	557
Legislacion estranjera. . . .	»	558
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Del alojamiento en general y de la dificultad de suprimirlo.	»	560
Sec. II. Del alojamiento activo y personas que tienen derecho á él.	»	561
Sec. III. Del alojamiento pasivo.	»	562
§. 1.° Exenciones.	»	562
§. 2.° Indemnizacion. . . .	»	564
ALQUILAR.	»	565
ALQUILER.	»	565
ALQUIMIA.	»	565
ALTAR.	»	565
ALTERACION DE LA MONEDA.	»	569
ALTERNANTE, ALTERNAR, ALTERNATIVA. . .	»	569
ALTEZA.	»	575
ALUMBRADO.	»	575
ALUMBRAMIENTO.	»	580
ALUMBRAMIENTO DE AGUAS.	»	580
ALUVION.		
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Caracteres del alu-		

	TOM.	PAG.
vion. — Casos en que tiene lugar. .	II	580
SEC. II. A quien pertenece la propiedad del aluvion. — Efectos de ella.	»	583
SEC. III. Reglas para la adjudicacion. — Competencia para conocer de las cuestiones relativas á esta materia. . .	»	584
ALVEDRIO.	»	587
ALVEO.	»	588
ALZA.	»	591
ALZADA.	»	591
ALZADAMENTE.	»	591
ALZAR.	»	591
ALZAR EL DESTIERRO. .	»	592
ALZAR LOS EMBARGOS.	»	592
ALZAR LAS FIANZAS. . .	»	592
ALZAR LA FUERZA. . . .	»	592
ALZAR LOS SELLOS. . . .	»	592
ALZARSE.	»	593
ALZARSE, ALZAMIENTO.	»	593
ALZARSE CON CAUDALES AGENOS.	»	593
ALLANAMIENTO.	»	593
ALLANAMIENTO DE MORADA.		
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. ÚNICA. Del allanamiento de morada en general.	»	593
§. 1.° Del delito de allanamiento de morada ejecutado por los particulares. . . .	»	595
§. 2.° Del abuso de los empleados públicos en el allanamiento de morada.	»	596
§. 3.° Penalidad.	»	601
ALLANARSE.	»	601
AMA.	»	601
AMA.	II	602
AMAS.	»	602
AMANCEBAMIENTO. . . .	»	602
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	603
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	605
Disposiciones posteriores. . . .	»	604
Código penal	»	605
Leyes de Indias.	»	603
Legislacion estranjera. . . .	»	606
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	607
SEC. II. Consideraciones generales sobre el amancebamiento .	»	611
SEC. III. Observaciones prácticas.	»	615
AMENAZAS.	»	617
AMESNADORES.	»	621
AMIGABLE COMPONEDOR.	»	621
AMIGO.	»	621
AMILLARAR, AMILLARAMIENTO.	»	622
AMNISTIA.	»	622
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica de las amnistías. . .	»	623
SEC. II. Caractéres generales de las amnistías.	»	638
SEC. III. Diferencia que distingue la amnistía del indulto, de la disminucion y de la conmutacion de las penas. . .	»	643
SEC. IV. A quien corresponde la facultad de conceder las amnistías.	»	645

TOM. PAG.

Sec. V. Efectos de las amnistías. . . . . II 653

AMOJONAMIENTO, APEO, DESLINDE.

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

Leyes del Fuero Juzgo. . . . » 656
Id. de las Partidas. . . . . » 656
Id. de la Novísima Recopilacion. » 657
Disposiciones posteriores. . . » 658
Código penal . . . . . » 663
Legislacion estranjera. . . . » 664

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Ideas generales.—Naturaleza de la accion de deslinde y amojonamiento. » 666
Sec. II. Condiciones necesarias para que tenga lugar la accion de amojonamiento. . . . . » 668
Sec. III. Quienes pueden ejercitar la accion de deslinde y amojonamiento. . . . » 669
Sec. IV. De la autoridad competente para conocer del deslinde y amojonamiento. . . . . » 671
Sec. V. Modo de proceder en los juicios de apeo y deslinde. —Pruebas.—Reglas para la ejecucion de los amojonamientos. . . » 673
§. 1.° Modo de proceder. . » 673
§. 2.° Pruebas. . . . . » 674
§. 3.° Reglas para la ejecucion de los amojonamientos. . . . » 676
Sec. VI. Del deslinde y amojonamiento con relacion á terrenos especiales y determinados. . . . II 677
§. 1.° Deslinde y amojonamiento de los términos divisorios de los pueblos. . . . » 678
§. 2.° Deslinde y amojanamiento de los terrenos adyacentes á las carreteras y caminos. . . . . » 680
§. 3.° Deslinde y amojonamiento de los terrenos colindantes con los canales del Estado. . . . . » 681
§. 4.° Deslinde y amojonamiento de los montes correspondientes al Estado, á los pueblos y establecimientos públicos. . . . . » 682
§. 5.° Deslinde de los montes del Estado, de los pueblos y establecimientos públicos confinantes con los de particulares. . . . . » 685
Sec. VII. Respeto con que ha sido mirado el amojonamiento de la propiedad, y penas contra los que destruyen ó alteran los mojones. . » 693

AMONESTACION, AMONESTAR. . . . . . » 696
AMORTIZACION, AMORTIZAR. . . . . . » 697
AMORTIZACION CIVIL. . » 698
AMORTIZACION ECLESIASTICA. . . . . . » 698
AMORTIZACION DE LA

	TOM.	PAG.
DEUDA PUBLICA. . . .	II	698
AMOVIBLE.	»	699
AMOVILIDAD.	»	699
AMPARA.	»	699
AMPARAR.	»	699
AMPARAR EN LA POSESION.	»	699
AMPARO DE DOTE. . . .	»	699
AMPARO DE HIDALGUIA.	»	700
AMPLIAR	»	700
ANALOGIA.	»	700
ANARQUIA.	»	700
ANATA O ANNATA: MEDIA-ANATA.	»	703
ANATEMA.	III	5
ANATOCISMO.	»	7
ANATOMIA.	»	7
ANCIANOS.	»	7
ANCLAJE, ANCORAJE (DERECHO DE).	»	7
ANDORRA (VALLES DE). . .	»	9
ANDRONA.	»	9
ANEJO.	»	9
ANFIBOLOGIA.	»	10
ANFUS.	»	10
ANGARIAS.	»	10
ANILLO.	»	10
ANILLO EPISCOPAL. . . .	»	10
ANILLO DEL PESCADOR.	»	11
ANILLO NUPCIAL.	»	11
ANILLO.	»	11
ANILLO.	»	12
ANIMALES.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	12
Id. de las Partidas.	»	12
Código penal.	»	13
Legislacion estranjera.	»	14
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De los animales en general.	»	15
SEC. II. De las diferentes especies de animales que reconoce el derecho. . . .	III	17
SEC. III. De los modos legales de adquirir ó perder el dominio de los animales. .	»	18
SEC. IV. Responsabilidad en que incurre el dueño de los animales por los daños que ocasionan en las personas ó en las cosas.	»	22
ANIVERSARIO.	»	27
ANONIMO.	»	28
ANTAPOCA	»	29
ANTEDATA.	»	29
ANTE-DIEM.	»	29
ANTELACION.	»	29
ANTE MI.	»	30
ANTICIPACION.	»	30
ANTICIPO.	»	30
ANTICRESIS.	»	30
ANTICUADO.	»	34
ANTIGÜEDAD.	»	35
ANTIGÜEDADES.	»	35
ANTILLAS	»	35
ANTINOMIA.	»	36
ANTI-PAPA.	»	36
ANTIPOCA.	»	36
AUTOR.	»	37
ANUALIDAD.	»	37
ANURADA.	»	37
ANUPTA.	»	37
ANULACION, ANULAB. . .	»	38
AÑO.	»	38
AÑO SOLAR.	»	40
AÑO LUNAR.	»	40
AÑO JULIANO.	»	41
AÑO GREGORIANO.	»	41
AÑO BISIESTO.	»	41
AÑO ECLESIASTICO. . . .	»	41
AÑO SANTO.	»	41
AÑO SABATICO.	»	41
AÑO DE GRACIA.	»	41
AÑO GRANDE.	»	41
AÑO CIVIL.	»	41

	TOM.	PAG.
AÑO EMERGENTE.	III	43
AÑO CONTINUO.	»	43
AÑO UTIL.	»	43
AÑO ACADEMICO.	»	43
AÑO ECONOMICO.	»	43
AÑO DE PROBACION O DE NOVICIADO.	»	43
AÑO RURAL, AÑO AGRICOLA.	»	44
AÑO DE LUTO O DE VIUDEDAD.	»	45
APARCERIA.	»	46
APARCERO.	»	46
APAREJADA EJECUCION.	»	46
APARTARSE.	»	46
APARTAMIENTO.	»	46
APEAR.	»	46
APEDREAR.	»	46
APELABLE.	»	47
APELACION.	»	47
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo. . . .	»	48
Id. de las Partidas.	»	48
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	54
Disposiciones posteriores. . .	»	64
Leyes mercantiles.	»	70
Id. administrativas.	»	72
Id. de minas.	»	74
Id. de Hacienda.	»	75
Id. militares.	»	78
Id. de Indias.	»	81
Id. canónicas.	»	91
Legislacion estranjera.	»	100
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. Introduccion histórica. . .	»	103
CAPITULO SEGUNDO. De la apelacion en los asuntos criminales. . .	»	112
Sec. I. Utilidad y fundamentos de la apelacion.	»	112
Sec. II. De las sentencias ó providencias que son ó no apelables.	III	115
§. 1.° De las sentencias definitivas.	»	116
§. 2.° De las sentencias ó providencias interlocutorias, y otras determinadas decisiones judiciales.	»	121
Sec. III. Quienes pueden apelar.	»	124
§. 1.° De las partes ó sus representantes. .	»	125
§. 2.° De los que sin haber litigado, se sienten perjudicados. . .	»	128
§. 3.° De las personas á quienes aprovecha la apelacion interpuesta por un tercero.	»	131
Sec. IV. De los términos para apelar.	»	133
§. 1.° Dentro de que plazo debe interponerse la apelacion. . .	»	133
§. 2.° De las causas que suspenden ó prorogan el plazo para apelar.	»	136
Sec. V. Ante quien y para ante quien debe apelarse.	»	139
Sec. VI. En que forma debe interponerse la apelacion.	»	144
Sec. VII. De los efectos de la apelacion y de su admision. . .	»	145
§. 1.° Del efecto devolutivo.	»	146
§. 2.° Del efecto suspensivo.	»	150
§. 3.° De la denegacion ó admision de la apelacion. . . .	»	153
Sec. VIII. De los recursos legales contra la de-		

	TOM.	PAG.
cision del inferior que deniega ó admite indebidamente la apelacion, ó manda ejecutar la sentencia apelada.	III	155
§. 1.° Del recurso contra la denegacion improcedente.	»	156
§. 2.° Del recurso contra la admision en un solo efecto, procediendo en ambos, ó al revés. . . .	»	160
§. 3.° Del recurso contra los atentados de los jueces inferiores.	»	161
SEC. IX. De la remesa de autos originales ó en compulsa al superior.	»	162
SEC. X. Dentro de que término debe el apelante presentarse á mejorar su apelacion.	»	165
SEC. XI. Del procedimiento de la apelacion ante los tribunales de alzada.	»	166
§. 1.° De la sustanciacion y trámites de la apelacion en los asuntos comunes. . .	»	167
§. 2.° Id. en los negocios mercantiles. . . .	»	172
§. 3.° Id. en los asuntos contencioso--administrativos.	»	172
§. 4.° Id. en los de cuentas de la Hacienda pública..	»	175
§. 5.° Id. en los del fuero de Guerra y Marina.	»	175
§. 6.° Id. en los del fuero eclesiástico. . . .	»	177
SEC. XII. De la desercion ó desestimiento de la apelacion.. . . .	III	178
CAPITULO TERCERO. De la apelacion y consulta en materia criminal.	»	182
SEC. I. De las providencias y sentencias que son ó no apelables.	»	182
SEC. II. De las personas que pueden apelar; dentro de qué término; para ante quién y en qué forma.	»	184
§. 1.° Personas que pueden apelar.	»	184
§. 2.° Dentro de qué término debe interponerse la apelacion. . .	»	184
§. 3.° Para ante quién debe apelarse.	»	185
§. 4.° En qué forma debe apelarse.	»	186
SEC. III. De las providencias ó sentencias que deben consultarse.	»	186
SEC. IV. Del procedimiento en las causas remitidas en apelacion ó en consulta al tribunal superior.	»	187
§. 1.° De la sustanciacion y trámites de la apelacion en los juicios sobre faltas. .	»	188
§. 2.° Id. id. de la apelacion y consulta en los delitos comunes. .	»	190
§. 3.° Id., id. en los delitos del fuero de Guerra y Marina.. . . .	»	198
§. 4.° Id.. id. en los delitos del fuero eclesiástico.	»	200
CAPITULO CUARTO. De la apela-		

	TOM.	PAG.
cion accesoria, ó adhesion á la apelacion.	III	200
SEC. I. Origen, naturaleza y utilidad de la apelacion accesoria.	»	200
SEC. II. De los casos en que tiene lugar la apelacion accesoria. .	»	202
SEC. III. Del tiempo en que debe interponerse, y en qué forma. .	»	203
CAPITULO QUINTO. De las apelaciones en Ultramar.	»	204
APELLIDAR: APELLIDO.	»	243
APERCIBIMIENTO.	»	249
APERCIBIDO.	»	253
APEROS.	»	253
APERTURA.	»	254
APERTURA DE TESTAMENTO.	»	
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	254
Id. de las Partidas.	»	254
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	255
Legislacion estranjera.	»	255
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. De la apertura de los testamentos cerrados. . . .	»	257
§. 1°. Personas que pueden pedir la apertura del testamento cerrado.	»	257
§. 2.° Personas que tienen obligacion de presentarlo.	»	258
§. 3.° Juez competente para la apertura. . .	»	258
§. 4.° Diligencias de apertura.	»	259
APOCA.	III	261
APOCRIFO.	»	261
APOCRISARIO.	»	261
APODERADO: APODERAMIENTO: APODERAR. .	»	261
APODERARSE.	»	262
APORTAR.	»	262
APORTELLADO.	»	262
APORTILLAR.	»	262
APOSENTADOR.	»	262
APOSENTO (REGALIA DE). . .	»	264
APOSTADERO.	»	268
APOSTASIA: APOSTATA: APOSTATAR.	»	269
APOSTOLICO.	»	283
APOSTOLOS.	»	283
APRECIAR.	»	284
APREHENDER LOS BIENES.	»	284
APREHENER LA POSESION.	»	284
APREHENSION.	»	284
APREMIAR: APREMIO. . .	»	286
APREMIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES.	»	287
APREMIO PARA LA DEVOLUCION DE AUTOS. .	»	288
APREMIO (EN MATERIAS DE HACIENDA.)		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Decretos.	»	296
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	305
SEC. II. De los apremios y sus especies. . .	»	313
§. 1.° Apremios contra los contribuyentes morosos. . . .	»	314
§. 2.° Apremios contra los cobradores. . . .	»	317
§. 3.° Apremios contra los ayuntamientos y		

	TOM.	PAG.
los alcaldes. . . .	III	318
§. 4.° Apremios especiales.	»	319
SEC. III. Consideraciones generales.	»	320
APREMIO A PROCESADOS.	»	324
APREMIO POR SUSTITUCION DE PENA.	»	327
APREMIO A TESTIGOS. . .	»	327
APREMIO (VIA DE).		
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. UNICA. Del procedimiento de apremio en los negocios ordinarios y mercantiles.	»	330
§. 1.° Casos en que tiene lugar la via de apremio.	»	330
§. 2.° Condiciones necesarias para que tenga lugar la via de apremio.	»	332
§. 3.° Trámites que se siguen en los procedimientos de apremio, ...	»	334
APRENDIZ: APRENDIZAGE.	»	335
APRESAMIENTO.	»	338
APROBACION: APROBAR.	»	339
APROBANTES (CAPITANES).	»	339
APROPIARSE.	»	339
APROVECHAMIENTOS. . .	»	340
APTITUD.	»	340
APUESTA.	»	340
APUNTAMIENTO.		
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reglas generales para toda clase de apuntamientos. .	»	344
SEC. II. Reglas para formar los apuntamientos en negocios civiles.	»	345
SEC. III. Reglas para formar los apuntamientos en negocios criminales.	III	348
SEC. IV. Reglas para formar los apuntamientos en pleitos sobre agravios de cuentas, filiacion y otros semejantes.	»	349
ARA: ARAS.	»	350
ARANCEL.	»	350
ARANCELES DE ADUANAS.	»	351
ARANCELES JUDICIALES.	»	357
ARANCELES DE ULTRAMAR.	»	363
ARANCELES JUDICIALES DEL FUERO COMUN. . .	»	363
ARANCEL DIPLOMATICO.	»	368
ARANCEL DE CRUZADA EN ULTRAMAR.	»	368
ARANCELES CONSULARES.	»	368
ARANCEL DE DIEZMO Y PRIMICIAS EN ULTRAMAR	»	368
ARANCEL DE DERECHOS DE ESTOLA Y PIE DE ALTAR.	»	368
ARANCEL O TARIFA DE GRACIAS AL SACAR. . .	»	368
ARANCEL O TARIFA DE MEDICOS Y CIRUJANOS EN ULTRAMAR.	»	368
ARANCELES DE TITULOS Y GRANDEZAS.	»	368
ARANCEL DE TITULOS Y LICENCIAS EN ULTRAMAR.	»	368
ARANCEL DE PORTAZGOS Y PONTAZGOS. . .	»	369
ARBITRADOR: ARBITRAGE: ARBITRAMENTO: ARBITRO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo. . . .	»	369
Id. de las Partidas.	»	369

INDICE.

	TOM.	PAG.
Id. de la Novísima Recopilacion.	III	373
Disposiciones posteriores. . .	»	374
Código de Comercio.	»	375
Ley de enjuiciamiento.	»	375
Código penal.	»	379
Disposiciones canónicas. . . .	»	379
Legislacion estranjera. . . .	»	380

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Introduccion histórica.	»	384
SEC. II. Del arbitrage en general, su naturaleza y especies. .	»	390
SEC. III. Del arbitrage voluntario y de las cosas que pueden ser objeto de él. .	»	391
SEC. IV. Del arbitrage forzado, y de los casos en que tiene lugar.	»	394
SEC. V. De las personas que pueden ó no someter sus negocios al juicio arbitral.	»	402
SEC. VI. De las personas que pueden ó no ser nombradas árbitros ó arbitradores.	»	406
SEC. VII. Del número de árbitros ó arbitradores que pueden nombrarse. . . .	»	410
SEC. VIII. Del compromiso ó constitucion del arbitrage..	»	411
§. 1.° Carácter y naturaleza del compromiso. .	»	411
§. 2.° Formas del compromiso..	»	412
§. 3.° Circunstancias que debe contener el compromiso. . . .	»	415
§. 4.° Efectos del compromiso.	»	419
§. 5.° Fin del compromiso .	III	420
SEC. IX. De las facultades y competencia de los árbitros y arbitradores.	»	426
§. 1.° Cuestiones sobre que pueden resolver..	»	426
§. 2.° Medidas que pueden ordenar.	»	428
§. 3.° Reglas segun las cuales deben decidir.	»	430
§. 4.° Término dentro del que deben juzgar.	»	431
§. 5.° Prorogacion de sus facultades.	»	431
SEC. X. Del reemplazo de los árbitros y arbitradores. . . .	»	432
§. 1.° Causas que pueden dar lugar al reemplazo de uno ó mas árbitros ó arbitradores. . . .	»	432
§. 2.° Forma de proceder al reemplazo de los árbitros ó arbitradores.	«	433
SEC. XI. Del procedimiento en el juicio arbitral hasta la sentencia.	»	433
SEC. XII. De la sentencia arbitral.	»	429
§. 1.° Tiempo y lugar en que ha de dictarse la sentencia arbitral.	»	440
§. 2.° Cosas que debe comprender la sentencia arbitral. . . .	»	440
§. 3.° Forma de la sentencia arbitral.	»	441
SEC. XIII. Del tercer árbitro. .	»	441
§. 1.° Carácter y naturaleza de las funciones del tercer árbitro. . .	»	441
§. 2.° Casos y forma del nombramiento del ter-		

	TOM.	PAG.
cer árbitro. . . .	III	442
§. 3.° Cosas sobre que debe juzgar el tercer árbitro y modo de proceder.	»	444
§. 4.° Sentencia del tercer árbitro.	»	446
§. 5.° Cuándo debe conocer el tribunal como juez de discordia y en qué forma. . .	»	446
SEC. XIV. De la fuerza y efectos de la sentencia arbitral.	»	449
SEC. XV. De la homologacion de las sentencias arbitrales y de su ejecucion. . .	»	451
SEC. XVI. De los efectos del auto de *exequatur* y del de prestacion de fianzas. . . .	»	452
SEC. XVII. De los recursos contra las sentencias arbitrales.	»	453
§. 1.° Recursos ordinarios. .	»	453
§. 2.° Recursos estraordinarios.	»	457
SEC. XVIII. De los honorarios de los árbitros y arbitradores. . . .	»	459
SEC. XIX. De la responsabilidad de los árbitros y arbitradores.	»	460
§. 1.° Responsabilidad criminal.	»	460
§. 2.° Responsabilidad civil.	»	462
ARBITRARIA (SENTENCIA)..	»	462
ARBITRARIEDAD.	»	462
ARBITRATORIA (SENTENCIA).	»	463
ARBITRO JUDICIAL. . . .	»	463
ARBITRIO.	»	466
ARBITRIOS MUNICIPALES.	»	466
ARBITRIOS DE HACIENDA PUBLICA.	»	467
ARBOL.		
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. ÚNICA. Naturaleza, propiedad y disfrute de los árboles. . . .	III	472
§. 1.° Naturaleza y carácter de los árboles. .	»	472
§. 2.° A quién pertenecen los árboles. . . .	»	473
§. 3.° Restricciones que tiene el propietario.	»	477
§. 4.° Menoscabos causados en la propiedad de los árboles. . .	»	480
§. 5.° Disfrute de los agenos.	»	481
ARBOL GENEALOGICO. .	»	482
ARBOLADOS.	»	491
ARCABUCEAR.	»	491
ARCEDIANO. ARCEDIANADO. ARCHIDIACONO.	»	491
ARCHERO.	»	494
ARCHIDUQUE.	»	494
ARCHIMANDRITA, O ARGIMANDRITA.	»	494
ARCHISINAGOGO.	»	494
ARCHIVERO.	»	494
ARCHIVISTA.	»	494
ARCHIVO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	495
Disposiciones posteriores. . . .	»	501
Leyes de Indias..	»	504
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. . .	»	508
SEC. II. Importancia y necesidad de los archivos: clasificacion de ellos: deberes de los gobiernos y autoridades res-		

	TOM.	PAG.
pecto de los mismos.	III	513
§. 1.° Importancia y necesidad de los archivos.	»	514
§. 2.° Clasificacion de los archivos.	»	516
§. 3.° Deberes de los gobiernos y de las autoridades respecto de los archivos. . . .	»	519
SEC. III. De la fuerza y valor legal de los documentos archivados.	»	521
SEC. IV. Atribuciones, deberes y responsabilidad de los encargados de los archivos: id. de las personas estrañas que atentan contra el sagrado de los mismos.	»	526
§. 1.° Atribuciones de los encargados de los archivos.	»	526
§. 2.° Deberes de los encargados de los archivos.	»	527
§. 3.° Responsabilidad de los encargados de los archivos.	»	528
§. 4.° Responsabilidad de las personas no encargadas de los archivos que atentan contra el sagrado de estos.	»	530
SEC. V. Observaciones y principios generales sobre arreglo de archivos. . . .	»	532
SEC. VI. Noticia de los archivos mas notables del reino. . . .	»	537
§. 1.° Archivo del Real Palacio.	»	538
§. 2.° Id. de las Córtes. . .	III	539
§. 3.° Id. de los ministerios.	»	539
§. 4.° Id. del Consejo de Castilla.	»	541
§. 5.° Id. de la Cámara de Castilla.	»	543
§. 6.° Id. de la Cámara de Aragon.	»	544
§. 7.° Id. de la presidencia de Castilla. . . .	»	544
§. 8.° Id. de la inquisicion.	»	544
§. 9.° Id. del Consejo de las Ordenes.	»	545
§. 10. Id. del Real Sello. . .	»	545
§. 11. Id. del ayuntamiento de Madrid.	»	546
§. 12. Id. de Simancas. . .	»	546
§. 13. Id. de Barcelona. . .	»	547
§. 14. Id. de Sevilla. . . .	»	548
§. 15. Id. de Valencia.. . .	»	549
§. 16. Id. de Zaragoza. . .	»	549
§. 17. Indicacion general de otros archivos que merecen consideracion.	»	549
ARCIPRESTE. ARCIPRESTAZGO.	»	551
ARCONTE.	»	556
ARDITE.	»	556
AREA.	»	556
ARENZAZGO.	»	556
ARGIENZO. ARIENZO. . .	»	557
ARGOLLA.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Código penal	»	557
Legislacion estranjera.	»	557
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica..	»	558
SEC. II. Naturaleza de la pena de argolla, y casos en que tiene lugar.	»	559

	TOM.	PAG.
Sec. III. Efectos de la argolla..	III	561
ARISTOCRACIA.	»	562
ARMADOR.	»	570
ARMAMENTO.	»	571
ARMAMENTO..	»	571
ARMAR.	»	571
ARMAS..	»	571
ARMAS.	»	572
ARMAS.	»	572
ARMAS PROHIBIDAS.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	573
Sec. II. Ideas generales acerca de las armas.	»	580
§. 1.° Armas prohibidas.	»	581
§. 2.° Armas permitidas.	»	583
§. 3.° Consideraciones comunes respecto á las armas permitidas y prohibidas..	»	586
Sec. III. Disposiciones vigentes sobre la prohicion de armas.	»	588
§. 1.° Prohibiciones del uso de armas y sus penas.	»	589
§. 2.° Fabricacion y espendicion de armas y sus penas.	»	591
§. 3.° Autorizacion para el uso de armas.	»	593
§. 4.° Abuso de armas.	»	597
§. 5.° Autoridades competentes en materia de armas prohibidas.	»	599
ARMERO.	»	600
ARMISTICIO.	»	600
ARQUEO.	»	601
ARQUEO.	»	602
ARQUITECTO: ARQUITECTURA.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	602
Sec. II. Circunstancias y requisitos para obtener la consideracion y el título de arquitecto.	III	610
Sec. III. Prerogativas y dechos de los arquitectos.	»	611
Sec. IV. Deberes y responsabilidad de los arquitectos.	»	616
§ 1.° Deberes y responsabilidad de los arquitectos anejos y esenciales á su profesion.	»	618
§. 2.° Deberes como peritos en la administracion de justicia.	»	620
§. 3.° Id. como ausiliares de la administracion pública.	»	622
ARRAIGADO.	»	624
ARRAIGARSE.	»	624
ARRAIGO.	»	624
ARRAIGAR EL JUICIO.	»	624
ARRAS.	»	627
ARRAS EN LOS CONTRATOS.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	627
Id. de las Partidas.	»	628
Legislacion estranjera.	»	628
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. De las arras en general y de sus especies.	»	629
Sec. II. De los efectos que producen las arras.	»	630
ARRAS COMO DONACION.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	632

	TOM.	PAG.
Id. de las Partidas. . , . .	III	632
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	633
Legislacion estranjera. . . .	»	634
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	635
SEC. II. De las arras en general, su carácter y naturaleza. .	»	639
SEC. III. Quiénes pueden dar arras, cuándo y de qué bienes. . . .	»	641
SEC. IV. De la cuota de las arras.	»	644
SEC. V. De los derechos que nacen de la constitucion de las arras respecto del marido y de la muger antes y despues de la disolucion del matrimonio.	»	649
§. 1.° De los derechos que nacen de la constitucion de las arras respecto del marido y de la muger durante el matrimonio.	»	649
§. 2.° De los derechos que nacen de la constitucion de las arras respecto del marido y de la muger despues de la disolucion del matrimonio. . . .	»	650
SEC. VI. Deduccion y abono de las arras. . . .	»	652
SEC. VII. De las arras en algunas provincias de España. . . .	»	653
ARRAS EN LOS ESPONSALES.	»	654
ARRAS EN LOS MATRIMONIOS.	III	656
ARREALA.	»	656
ARREBATO.	»	656
ARRECIFE.	»	656
ARRENDADOR.	»	657
ARRENDAMIENTO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	657
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	662
Disposiciones posteriores. . .	»	667
Leyes canónicas.	»	670
Legislacion estranjera.	»	671
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. Del arrendamiento en general.	»	675
SEC. I. Consideraciones generales: carácter y naturaleza del arrendamiento. .	»	675
SEC. II. Condiciones esenciales del arrendamiento.	»	679
§. 1.° Del consentimiento. .	»	679
§. 2.° De la cosa..	»	681
§. 3.° Del precio.	»	684
SEC. III. De las personas que pueden celebrar el contrato de arrendamiento. . .	»	686
SEC. IV. De las acciones que se derivan del arrendamiento. . .	»	688
CAPITULO SEGUNDO. Del arrendamiento de cosas.	»	689
SEC. I. Consideraciones especiales y comunes á los arrendamientos de cosas.	»	690
SEC. II. De las obligaciones del arrendador y del arrendatario de		

	TOM.	PAG.
cosas.	IV.	695
§. 1.° Obligaciones del arrendador.	»	695
§. 2.° Obligaciones del arrendatario. . . .	»	702
Sec. III. Modos de concluirse los arrendamientos de cosas.	»	714
Sec. IV. De la tácita reconduccion.	»	727
Sec. V. Del arrendamiento de prédios rústicos.	»	730
Sec. VI. Del arrendamiento de casas.	»	745
§. 1.° Consideraciones aplicables á todos los arrendamientos de de casas.	»	745
§. 2.° Consideraciones aplicables á los arrendamientos de casas en Madrid. .	»	753
Sec. VII. Del alquiler de cosas muebles. . . .	»	757
Sec. VIII. Del arrendamiento de ganados. . . .	»	761
Sec. IX. De algunos contratos que tienen analogía con el arrendamiento de cosas.	»	765
CAPITULO TERCERO. Del arrendamiento de obras y servicios. . . .	»	768
Sec. I. Consideraciones generales sobre el arrendamiento de obras y servicios.	»	768
Sec. II. Obras y servicios que pueden ser objeto del contrato de arrendamiento.	»	769
§. 1.° De las personas que se obligan al servicio de otro.	»	771
§. 2.° De los conductores y porteadores. . . .	»	774
§. 3.° De los que toman á su cargo la construccion de una obra.	IV.	776
§. 4.° De las obras á destajo.	»	777
Sec. III. De algunos contratos que tienen analogía con el arrendamiento de obras.	»	782
ARREPENTIMIENTO. . . .	IV.	5
ARRESTO.	»	16
ARRIANISMO.	»	17
ARRIBADA.	»	17
ARRIBADAS (JUEZ DE). . . .	»	20
ARROGACION.	»	20
ARSENAL.	»	20
ARTEFACTO.	»	20
ARTES EN SENTIDO ACADEMICO.	»	30
ARTES (CONSERVATORIO Y ESCUELA ESPECIAL DE). . .	»	30
ARTES LIBERALES, ARTES MECANICAS.	»	30
ARTES (VOCES).	»	30
ARTESANO.	»	30
ARTICULAR.	»	36
ARTICULO.	»	37
ARTICULO EN SENTIDO ADMINISTRATIVO. . . .	»	38
ARTICULO DE INCONTESTACION O DE NO CONTESTAR.	»	
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales.	»	41
Sec. II. De los casos en que proceden y deben ser admitidos los artículos de incontestacion. . . .	»	43
Sec. III. Del procedimiento judicial en materia de artículos de incontestacion. . . .	»	55
ARTICULO INHIBITORIO.	»	57
ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.	»	57
ARTICULO DE FE.	»	62

	TOM.	PAG.
ARTICULOS DE FE.	IV.	62
ARTICULOS ORGANICOS.	»	63
ARTIFICE.	»	65
ARTILLERIA.	»	67
ARTISTA.	»	67
ARZOBISPO.	»	69
ASADURA.	»	73
ASAMBLEA.	»	74
ASAMBLEA EN SENTIDO ESPECIFICO.	»	74
ASCENSOS.	»	77
ASCENSOS MILITARES.	»	77
ASCENSOS DE EMPLEADOS.	»	77
ASCETA, ASCETISMO.	»	77
ASEGURACION, ASEGURADO, ASEGURADOR, ASEGURAR.	»	78
ASENTAMIENTO.	»	78
ASCENDENCIA, ASCENDIENTES.	»	81
ASENTIMIENTO, ASENTIR.	»	82
ASENTISTA.	»	83
ASEQUI.	»	83
ASERCION.	»	83
ASERTOR.	»	83
ASERTORES DE PAZ.	»	83
ASERTORIO.	»	84
ASESINATO, ASESINO.	»	84
ASESOR.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Fuero Juzgo.	»	87
Leyes de las Partidas.	»	87
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	88
Disposiciones posteriores.	»	88
Leyes de Indias.	»	89
Legislacion estranjera.	»	93
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Introduccion histórica.	»	95
Sec. II. De los asesores en general y de sus diferentes especies.	IV.	97
Sec. III. De las personas autorizadas para desempeñar el cargo de asesores.	»	99
Sec. IV. Derechos y deberes de los asesores.	»	100
Sec. V. Casos en que cesa el conocimiento de los asesores.	»	102
Sec. VI. Responsabilidad de los asesores, y penas en que incurren	»	103
Sec. VII. Asesores de Indias.	»	106
§. 1.° Asesores de gobierno.	»	106
§. 2.° Asesores titulares letrados.	»	108
§. 3.° Asesores de hacienda.	»	114
§. 4.° Asesores del Bureo.	»	115
ASESOR DE ADELANTADO.	»	115
ASESOR DE LOS ALCALDES DE LA HERMANDAD.	»	115
ASESOR DE ARTILLERIA.	»	116
ASESOR DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS.	»	116
ASESOR ESPECIAL DEL CUERPO DE CARABINEROS.	»	116
ASESOR DEL COMERCIO.	»	117
ASESOR DE CONSULADO DE ESPAÑA EN PAIS ESTRANJERO.	»	118
ASESOR DE CORREOS.	»	118
ASESOR DE CRUZADA.	»	119
ASESOR DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE RENTAS.	»	121
ASESOR DE FINCAS DEL ESTADO.	»	122
ASESOR DE GUARDIAS		

	TOM.	PAG.
DE LA REAL PERSONA.	IV.	122
ASESOR DE GUERRA.	»	123
ASESOR DE LA HERMANDAD DEL HOSPITAL GENERAL.	»	124
ASESOR DE INGENIEROS.	»	124
ASESOR DE LA INTENDENCIA MILITAR.	»	125
ASESOR DE LOTERIAS.	»	125
ASESOR DE MARINA.	»	126
ASESOR DE MILICIAS.	»	127
ASESOR DE MINAS.	»	128
ASESOR DE LA REAL CASA.	»	129
ASESOR DE RENTAS.	»	131
ASESOR DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA.	»	133
ASESOR DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MINAS Y AZOGUES.	»	136
ASESOR DEL TRIBUNAL PROTOMEDICATO.	»	136
ASESOR DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.	»	136
ASESORADO.	»	139
ASESORARSE.	»	139
ASESORIA.	»	139
ASIENTO: ASENTAR.	»	139
ASIENTO DE NEGROS.	»	140
ASIENTO.	»	142
ASIGNACION: ASIGNAR.	»	142
ASIGNADOS.	»	143
ASIGNATURA.	»	143
ASILO.	»	143
ASILO ECLESIASTICO.		
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo.	»	144
Id. de las Partidas.	»	145
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	146
Disposiciones posteriores.	»	151
Leyes de Indias.	»	151
Legislacion canónica.	»	152
Id. estranjera.	IV.	155
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Exámen filosófico legal del asilo eclesiástico.	»	158
SEC. II. Historia de este derecho en la iglesia universal y mas especialmente en la de España.	»	165
§. 1.° Historia del asilo en la Iglesia universal.	»	165
§. 2.° Id. en la de España.	»	175
SEC. III. Derecho canónico civil vigente sobre asilo.	»	182
§. 1.° Asilo con relacion al lugar inmune.	»	185
§. 2.° Asilo con relacion al delito.	»	191
§. 3.° Asilo con relacion á la condicion ó estado de la persona.	»	198
§. 4.° Asilo con relacion al procedimiento.	»	205
SEC. IV. Conveniencia ó inconveniencia del derecho del asilo en el estado actual de nuestra legislacion.	»	214
ASILO TERRITORIAL O ESTRANJERO.	»	215
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Tratados con Portugal.	»	216
Id. con Francia.	»	220
Id. con el imperio de Marruecos.	»	223
Id. con Dinamarca.	»	224
Id. con la regencia de Trípoli.	»	225
Id. con la de Tunez.	»	225
Id. con la de Holanda.	»	225

	TOM.	PAG.
Id. con la gran Bretaña é Irlanda	IV.	226
Id. con Gibraltar	»	227
Id. con Cerdeña	»	227
Disposiciones relativas al cumplimiento de los tratados	»	228
Legislacion estrangera	»	229
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Carácter y efectos del asilo territorial	»	234
Sec. II. De la estradicion	»	238
§. 1.° Naturaleza y fundamento de la estradicion	»	238
§. 2.° Reglas que determinan la estradicion, aplicadas á la práctica de España	»	240
§. 3.° De la espulsion de los refugiados	»	251
ASILO DE LOS BUQUES	»	252
ASILO DE PALACIO	»	254
ASISTENCIA	»	258
ASISTENCIAS	»	258
ASISTENTA	»	138
ASISTENTE	»	258
ASISTIDO	»	260
ASOCIACION. — ASOCIACIONES ILICITAS	»	
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion	»	260
Disposiciones posteriores	»	263
Código penal	»	263
Legislacion estrangera	»	264
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica	»	275
Sec. II. Consideraciones generales sobre el derecho de asociacion y reunion	IV.	278
Sec. III. De las asociaciones ilícitas	»	281
§. 1.° De las sociedades secretas	»	281
§. 2.° De las demas asociaciones ilícitas	»	286
Sec. IV. De las reuniones	»	290
ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS	»	291
ASONADA	»	302
ASPA	»	303
ASPADO	»	303
ASTREA	»	304
ASTROLOGIA	»	304
ASTURIAS	»	309
ASUETO	»	309
ATAJADOR DE GANADO	»	309
ATEISMO, ATEISTA, ATEO	»	309
ATENCION	»	312
ATENTADO.		
Sumario.		
Sec. I. Del atentado en sentido civil	»	313
Sec. II. Del atentado en sentido criminal	»	318
§. 1.° Del atentado en general	»	318
§. 2.° Del atentado contra la autoridad. Diferencia entre el atentado y el desacato, segun el código penal	»	319
§. 3.° Algunas consideraciones teórico-prácticas sobre las disposiciones del código, acerca del atentado contra la autoridad	»	321
§. 4.° A quién compete la persecucion del atentado	»	324
§. 5.° Penalidad del atentado		

	TOM.	PAG.
contra la autoridad. Legislacion comparada. . . .	IV	333
§. 6.° Del desafuero en los casos de atentado contra la autoridad.	»	337
§. 7.° Algunas observaciones sobre procedimiento en el caso de atentado. . .	»	341
ATENUAR.	»	344
ATESTADO.	»	344
ATESTIGUAR.	»	344
ATRACCION.	»	344
ATRASOS.	»	344
ATRAVESAR, ATRAVESARSE.	»	344
ATRIBUCIONES, ATRIBUIR.	»	345
ATRIBUTO.	»	345
ATROZ.	»	345
AUBANA.	»	346
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Tratados, arreglos y convenios entre España é Inglaterra.. .	»	348
Id. con Francia..	»	349
Id. con Saboya.	»	350
Id. con los Paises-Bajos. . .	»	351
Id. con el Austria.	»	352
Id. con el sacro romano imperio..	»	353
Id. con la Toscana.	»	353
Id. con Dinamarca.	»	353
Id. con Holanda.	»	354
Id. con Marruecos.	»	354
Id. con Portugal.	»	354
Id. con Turquía.	»	354
Id. con la Cerdeña.	»	355
Id. con Trípoli.	»	356
Id. con los Estados-Unidos de América.	»	356
Id. con las Dos-Sicilias. . . .	»	356
Id. con Sajonia.	»	357
Id. con Méjico.	»	357
Id. con Bélgica.	IV.	357
Id. con la república del Ecuador.	»	358
Id. con la Suecia.	»	359
Id. con la república de Costa-rica.	»	359
Legislacion estranjera.. . . .	»	359
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica. .	»	361
Sec. II. De la naturaleza del derecho de aubana..	»	363
§. 1.° Del derecho de aubana considerado bajo el punto de vista de su justicia y conveniencia. . .	»	364
§ 2.° Gravámenes que se han comprendido ó se comprenden bajo la denominacion de aubana. .	»	367
§. 3.° A quién compete el derecho de aubana..	»	369
Sec. III. Escepciones respecto de la aubana. Consideraciones prácticas acerca de este gravámen. . .	»	370
§. 1.° Escepciones del gravámen de aubana.	»	370
§. 3.° Consideraciones prácticas acerca de la aubana..	»	372
Sec. IV. Algunas consideraciones generales sobre el estado del derecho de aubana en las naciones civil zadas. Conclusion..	»	375
AUDIENCIA.	»	382
AUDIENCIA EN LO JUDICIAL.	»	386
AUDIENCIAS TERRITO-		

TOM. PAG.

BIALES. . . . . IV. 387

Sumario.

Sec. I. Reseña histórica.. . » 388
§. 1.° Consideraciones generales sobre la institucion de las audiencias, y orígen de las mismas.. . » 388
§. 2.° De la audiencia real. » 391
§. 3.° De las audiencias territoriales de la Península hasta el año de 1812. . . » 396
Sec. II. De las actuales audiencias territoriales de la Península: número, denominacion y territorio de las mismas. . . . . » 406
Sec. III. Organizacion y categoría de las actuales audiencias. . . » 411
Sec. IV. Atribuciones de las actuales audiencias de la Península. . . . . » 424
§. 1.° Atribuciones en lo civil.. . . . . » 424
§. 2.° Atribuciones en lo criminal. . . . , . » 427
§. 3.° Atribuciones en lo gubernativo y consultivo.. . . . . » 428
§. 4.° Tratamiento y modo de espedir sus mandatos y ejecutorias las audiencias. . . . . » 430
Sec. V. De las audiencias de Ultramar: creacion, denominacion, organizacion y atribuciones de las mismas. . . . » 431
§. 1.° Audiencias antiguas de Ultramar. . . IV. 431
§. 2.° Audiencias actuales de Ultramar. . . » 437

AUDIENCIAS (APERTURA SOLEMNE DE LAS). . . . . » 443

AUDIENCIAS (JUNTAS O SALAS DE GOBIERNO DE LAS) . » 443

AUDIENCIERO. . . . . » 446

AUDITOR. . . . . » 446

AUDITOR DE GUERRA. . » 446

AUDITOR DE MARINA. . » 455

AUDITOR DEL VICARIO GENERAL DE LOS EJERCITOS. . . . . » 458

AUDITOR DE LA CAMARA APOSTOLICA. . . . . .

AUDITOR DE LA NUNCIATURA. . . . . » 460

AUDITOR DEL PAPA. . . » 461

AUDITORES DE LA ROTA. » 461

AUDITORIA. . . . . » 463

AUDITORIO. . . . . » 463

AUREO. . . . . » 463

AUREO NUMERO. . . . . » 463

AUSENCIA. . . . . » 463

AUSENTE. . . . . » 463

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Acepciones de la palabra ausencia.—Clasificaciones de la ausencia. . . » 465
§. 1.° Acepciones de la palabra ausencia. . » 465
§. 2.° Clasificacion de la ausencia. . . . . » 466
§. 3.° Casos en que los ausentes se reputan presentes, y los presentes ausentes. . . . . » 474
Sec. II. De la ausencia del rey y de los individuos de la familia real. . . . . » 476
Sec. III. De la ausencia con

	TOM.	PAG.
relacion á empleos, dignidades y cargos públicos. . .	IV.	479
§. 1.° Ausencia de los senadores y diputados.	»	479
§. 2.° Ausencia de los funcionarios del órden administrativo. . .	»	480
§. 3.° Ausencia de los funcionarios del órden judicial.	»	487
§. 4.° Escusa y terminacion de cargos públicos por razon de ausencia.	»	493
SEC. IV. De la ausencia con relacion á beneficios y dignidades eclesiásticas. . .	»	499
§. 1.° Ausencia de obispos.	»	499
§. 2.° Ausencia de los demas eclesiásticos. . .	»	507
SEC. V. De la ausencia con relacion al ejercicio de derechos políticos y en general de los civiles.	»	524
§. 1.° Ausencia de determinado territorio dentro del reino . .	»	524
§. 2.° Ausencia fuera del reino.	»	528
SEC. VI. De la ausencia considerada en cuanto á las relaciones de familia.	»	536
§. 1.° Ausencia de los cónyuges.	»	537
§. 2.° Ausencia de padres é hijos.	»	556
§. 3.° Ausencia de los guardadores y menores.	»	558
SEC. VII. De la ausencia en lo concerniente á la propiedad, sucesiones y contratos.	»	559
§. 1.° Ausencia respecto á la propiedad. . .	IV.	560
§. 2.° Ausencia en lo tocante á la sucesion testada é intestada.	»	572
§. 3.° Ausencia en lo relativo á contratos. .	»	576
SEC. VIII. De la ausencia con relacion á los juicios.	»	581
§. 1.° Disposiciones comunes á las diferentes clases de juicios.	»	581
§. 2.° Ausencia en los juicios civiles.	»	585
§. 3.° Ausencia en los juicios criminales. . . .	»	591
SEC. IX. Restitucion por ausencia.	»	603
SEC. X. Presunciones á que da lugar la ausencia.	»	614
SEC. XI. Exámen del título 11, «De los ausentes.» Libro II del proyecto del código civil español. .	»	621
§. 1.° Observaciones generales.	»	622
§. 2.° De las medidas provisionales en caso de ausencia (cap. 1.°).	»	626
§. 3.° De la declaracion de ausencia (cap. 2.°)	»	629
§. 4.° De los efectos de la declaracion de ausencia (cap. 3.°). .	»	636
§. 5.° De la presuncion de la muerte del ausente (cap. 4.°). . .	»	644
§. 6.° De los efectos de la ausencia relativamente á los derechos eventuales del ausente (cap. 5.°).	»	650
§. 7.° Disposiciones genera-		

	TOM.	PAG.
les (cap. 6.°). . .	IV	635
§. 8.° Conclusion.	»	660
AUSTRIA (CASA DE).	V	5
AUTENTICA.	»	5
AUTENTICA (PERSONA AUTENTICA).	»	5
AUTENTICA (PENA DE LA). .	»	6
AUTENTICA DEL CODIGO.	»	6
AUTENTICA DE LAS INSTITUCIONES..	»	7
AUTENTICA DE LAS NOVELAS.	»	7
AUTENTICACION.	»	7
AUTENTICAMENTE.	»	7
AUTENTICAR O AUTENTIZAR.	»	7
AUTENTILIDAD.	»	7
AUTENTICO..	»	7
AUTENTICO.	»	7
AUTENTICO (AUTOR O JURISCONSULTO).	»	8
AUTENTICOS (LIBROS). . . .	»	10
AUTILLO.	»	10
AUTO.	»	10
AUTO ACORDADO.	»	11
AUTO APELABLE.	»	12
AUTO DEFINITIVO.	»	12
AUTO DE FE.	»	13
AUTO DE FIRMAS.	»	15
AUTO DE FUERZA.	»	15
AUTO GALLEGO.	»	15
AUTO INHIBITORIO. . . .	»	15
AUTO INTERLOCUTORIO.	»	15
AUTO DE OFICIO.	»	18
AUTO ORDINARIO.	»	18
AUTO DE PASCUAS. . . .	»	19
AUTO PARA MEJOR PROVEER.	»	19
AUTO DE PRUEBA.	»	21
AUTO DE SOBRESEIMIENTO.	»	21
AUTO DE TUNDA.	»	21
AUTOCRACIA.	»	21
AUTOGRAFO.	»	21
AUTOPSIA.	»	24
AUTOR.	»	26
AUTOR.	»	27
AUTOR.	V	27
AUTOR.	»	27
AUTOR.	»	27
AUTORES.	»	27
AUTORIDAD.	»	28
AUTORIDAD PUBLICA, AUTORIDAD PRIVADA. . .	»	32
AUTORIDAD, AUTORIDADES.	»	32
AUTORIDAD Y TAMBIEN AUTORIDADES COMPETENTES.	»	36
AUTORIDAD.	»	36
AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.	»	37
AUTORIDAD.	»	38
AUTORIDAD.	»	38
AUTORIDAD.	»	38
AUTORIDAD.	»	39
AUTORIDADES CONSTITUIDAS.	»	39
AUTORIZAR, AUTORIZACION, AUTORIZADO. . .	»	40
AUTOS.	»	41
AUXILIAR.	»	42
AUXILIAR (OBISPO).	»	42
AUXILIARES.	»	42
AUXILIATORIA.	»	43
AUXILIATORIA (CÉDULA). .	»	45
AUXILIO.	»	46
AUXILIO.	»	46
AUXILIO A PARTICULARES.	»	46
AUXILIO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.	»	49
AUXILIO A LA AUTORIDAD.	»	49
AUXILIO MILITAR O DE LA FUERZA PUBLICA. .	»	50
AUXILIO REAL, AUXILIO DEL BRAZO SECULAR.	»	52
AUXILIO POLITICO, AUXILIO A AUTORIDADES ESTRANJERAS, AUXILIO A SUBDITOS DE OTRA NACION.	»	57

	TOM.	PAG.
AUXILIOS ESPIRITUALES.	V	57
AVAL.	»	57
AVALUO.	»	58
AVANCE O AVANZO.	»	58
AVECINDARSE.	»	58
AVENENCIA.	»	58
AVENIDOR.	»	58
AVENTAJAS.	»	58
AVERACION.	»	58
AVERIA.	»	58
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	59
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	60
Ordenanzas de las matrículas de mar y sus aclaraciones	»	61
Código de comercio.	»	62
Legislacion estranjera.	»	66
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	75
Sec. II. De las averías en general y sus especies.	»	76
Sec. III. De las averías simples ó particulares.	»	80
§. 1.° De los daños y gastos que son considerados como averías simples ó particulares.	»	81
§. 2.° Del gravámen y responsabilidad que imponen las averías particulares.	»	87
Sec. IV. De las averías gruesas ó comunes.	»	88
§. 1.° De los daños y gastos que deben ser considerados como averías gruesas ó comunes.	»	89
§. 2.° Del gravámen y responsabilidad que imponen las averías gruesas ó comunes.	V	97
§. 3.° De las formalidades con que debe procederse á la distribucion del importe de la avería comun entre los contribuyentes.	»	108
§. 4.° De la manera de hacer efectiva la contribucion.	»	101
Sec. V. De las acciones que nacen de las averías y su prescripcion.	»	109
§. 1.° Acciones que nacen de las averías particulares.	»	109
§. 2.° Acciones que nacen de la avería comun.	»	110
Sec. VI. De la jurisdiccion competente en materia de averías.	»	112
AVERIA (DERECHO DE).	»	113
AVERIADO, AVERIARSE.	»	114
AVE.	»	114
AVEZADO, AVEZAMIENTO.	»	114
AVILA (MARCO DE).	»	114
AVIO.	»	114
AVOCACION, AVOCAR.	»	114
AYO, AYA.	»	117
AYUDA.	»	117
AYUDA.	»	117
AYUDA DE COSTA.	»	117
AYUDA DE PARROQUIA.	»	117
AYUDANTE.	»	119
AYUNO.	»	119
AYUNTAMIENTO.	»	121
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	122
Leyes de la Novísima Recopila-		

INDICE.

	TOM.	PAG.
cion.	V	123
Disposiciones posteriores. . . .	»	134
Leyes de Indias.	»	148
Legislacion estranjera.	»	151
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. Introduccion histórica de los ayuntamientos en España. . . .	»	162
Sec. I. Los ayuntamientos desde los primeros tiempos de la monarquía, hasta la reforma constitucional de 1812. .	»	163
Sec. II. Los ayuntamientos desde la reforma constitucional de 1812, hasta la ley orgánica de 1845.	»	177
CAPITULO SEGUNDO. Consideraciones generales sobre la institucion de los ayuntamientos.	»	186
Sec. I. Carácter y naturaleza de la institucion de los ayuntamientos en general, y de los cargos municipales.	»	186
Sec. II. Armonía en que deben estar los ayuntamientos con la Constitucion política de los Estados.	»	195
CAPITULO TERCERO. Esposicion doctrinal de nuestra actual legislacion en lo relativo al establecimiento y organizacion de los ayuntamientos.	»	204
Sec. I. Establecimiento, creacion, agregacion y supresion de los ayuntamientos: modo de proceder á ellas. . .	V	204
Sec. II. Número y clases de funcionarios que forman el ayuntamiento.	»	209
§. 1.° Número de concejales que deben componer los ayuntamientos.	»	210
§. 2.° Procurador síndico. .	»	211
§. 3.° Secretario de ayuntamiento.	»	215
Sec. III. Eleccion de los concejales ó individuos de ayuntamiento.	»	217
§. 1.° Circunstancias que se requieren para ser elector.	»	218
§. 2.° Circunstancias que se requieren para ser elegible.	»	224
§. 3.° Formacion de las listas electorales. . . .	»	230
§. 4.° Juntas electorales. . .	»	235
§. 5.° Escusas.	»	238
§. 6.° Aprobacion de las elecciones y declaracion de las escusas.	»	240
Sec. IV. Duracion y renovacion de los ayuntamientos. . . .	»	242
Sec. V. Suspension y disolucion de los ayuntamientos.	»	244
Sec. VI. Del modo de ejercer sus funciones los ayuntamientos.	»	246
CAPITULO CUARTO. Esposicion doctrinal de nuestra actual legislacion, en lo relativo á las atribuciones de los ayuntamientos.	»	253

INDICE.

	TOM.	PAG.
SEC. I. Idea general de las atribuciones de los ayuntamientos. . .	V	254
SEC. II. Facultades privativas de los ayuntamientos.	»	261
§. 1.° Nombramiento de depositario de los fondos del comun. . .	»	261
§. 2.° Admision de facultativos y maestros que se paguen de los fondos del comun, y nombramiento de los demas empleados y dependientes del inmediato servicio de los ayuntamientos. .	»	263
SEC. III. Atribuciones de efecto atributorio. . .	»	273
§. 1.° Atribuciones sobre la administracion de los propios, arbitrios y demas fondos del comun. . .	»	274
§. 2.° Id. sobre el disfrute de pastos, aguas y demas aprovechamientos comunes.	»	277
§. 3.° Id sobre el cuidado, conservacion y reparacion de los caminos y veredas, puentes y pontones vecinales. . .	»	280
§. 4.° Id. sobre las mejoras materiales de la poblacion..	»	282
§. 5.° Id. sobre repartimientos de granos de los pósitos, administracion y fomento de estos establecimientos. . . .	»	285
SEC. IV. Atribuciones de simple deliberacion. .	V	284
§. 1.° Atribuciones relativas á la formacion de las ordenanzas municipales y reglamentos de policía urbana y rural. .	»	284
§. 2.° Id. relativas á las obras de utilidad pública que se costeen de fondos del comun.	»	286
§. 3.° Id. á las mejoras materiales de que sean susceptibles los pueblos.	»	287
§. 4.° Id. á la formacion y alineacion de las calles, pasadizos y plazas.	»	288
§. 5.° Id. al arrendamiento de fincas, arbitrios y otros bienes del comun.	»	289
§. 6.° Id. al plantío, cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques del comun, y á la corta, poda y beneficio de sus maderas y leñas.	»	289
§. 7.° Id á la supresion, reforma, sustitucion y creacion de arbitrios, repartimientos ó derechos municipales, y modo de su recaudacion. . . .	»	291
§. 8.° Id. á los establecimientos municipales que convenga crear ó suprimir.	»	291
§. 9.° Id. á la enagenacion de bienes muebles é inmuebles, y sus		

	TOM.	PAG.
adquisiciones, redenciones de censos, préstamos y transacciones de cualquiera especie que hubiere de hacer el comun. . .	V	292
§. 10. Id. al establecimiento, supresion ó traslacion de ferias ó mercados. . . .	»	293
§. 11. Id. á la aceptacion de las donaciones ó legados, que se hicieren al comun, ó á algun establecimiento municipal.	»	294
§. 12. Id. al ejercicio de las acciones judiciales.	»	294
§. 13. Id. á conceder socorros ó pensiones individuales á los empleados del comun en recompensa de sus buenos servicios, igualmente que á sus viudas y huérfanos.	»	295
SEC. V. Atribuciones de especial delegacion.	»	296
SEC. VI. Responsabilidad de los ayuntamientos y de sus individuos en el ejercicio de sus funciones.	»	297
§. 1.° Casos en que tendrá lugar la responsabilidad de los ayuntamientos. .	V	298
§. 2.° Ante quién serán responsables los ayuntamientos. . . .	»	300
§. 3.° Casos y circunstancias en que los concejales pueden ser procesados por los tribunales de justicia.	»	301
CAPITULO QUINTO. Ayuntamientos de Ultramar. .	»	303
SEC. I. De los ayuntamientos de Ultramar en general.	»	304
SEC. II. De los ayuntamientos de la Habana, Puerto-Rico y Manila.	»	315
SEC. III. Régimen municipal de indios y sangleyes.	»	334
AYUNTAMIENTO (DAMNADO O DAÑADO Y PUNIBLE). . . .	»	342
AZAFATA.	»	347
AZAGAYA	»	347
AZAR.	»	347
AZCONA	»	347
AZIMISTAS, AZIMO, AZIMOS	»	347
AZOGUE (RENTA DE). . . .	»	348
AZOTE.	»	348
AZOTES.	»	348
AZUD.	»	335
AZUDA.	»	335
AZUFRE.	»	336
AZUMBRE.	»	356
AZUR.	»	356

B

	TOM.	PAG.
B.	V	337
BACALAO (RENTA DE).	»	337
BACHILLER.	»	339
BACULO.	»	360
BAGAGE.	»	362
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	363
Ordenanzas militares.	»	370
Disposiciones posteriores.	»	373
Legislacion estranjera.	»	378
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	379
SEC. II. De las corporaciones y personas que tienen derecho al servicio de bagages, y bajo qué condiciones.	»	382
SEC. III De las personas que están obligadas al servicio de bagages, y en qué forma.	»	383
SEC. IV. De las autoridades que intervienen en la prestacion de suministro de bagages, y sus atribuciones.	V	386
SEC. V. Juicio crítico del sistema actual de bagages.	»	387
BAHIA.	»	390
BAILE.	»	391
BAILES PUBLICOS.	»	393
BAILIO.	»	393
BAILIO (FUERO DE).	»	393
BAJA, BAJEZA, BAJO.	»	393
BAJEL.	»	394
BAJILLA DEL REY.	»	394
BAJILLA (DERECHO DE).	»	394
BAJIOS, BAJOS.	»	395
BALA.	»	395
BALADI.	»	395
BALANCE.	»	395
BALANDRA.	»	401
BALANZA.	»	401
BALANZA DE COMERCIO.	»	401
BALANZA (DERECHO DE).	»	402
BALANZA POLITICA.	»	402
BALDA.	»	402
BALDIOS.	»	402
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	403
Disposiciones posteriores.	»	405
Leyes de Indias.	»	407

TOM. PAG.

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Reseña histórica. . V 409
Sec. II. Derecho actual sobre baldíos, . . . » 416
Sec. III. Consideraciones generales acerca de la enagenacion de baldíos. . . . » 418
BALDON. . . . . . » 422
BALIJA . . . . . » 423
BALIZA. . . . . . » 423
BALOTA. . . . . . » 424
BALLENA. . . . . . » 424
BALLESTA, BALLESTERO. . . . . . » 424
BALLESTERIA (contribucion de). . . . . » 423
BANCA. . . . . . » 425
BANCA. . . . . . » 427
BANCARIAS. . . . . . » 427
BANCAROTA. . . . . . » 427
BANCO. . . . . . » 428
BANCO. . . . . . » 428
BANCO. . . . . . » 428
BANCO DE JUSTICIA. . . » 428
BANCO MINISTERIAL. . » 428
BANCO DEL REY. . . . . . » 429
BANCO DE TERRANOVA. » 429
BANCOS DE CREDITO. . » 429

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

Leyes y disposiciones relativas al Banco Español de San Fernando.. . . . . » 430
Id. relativas al Banco de Barcelona. . . . . » 459
Id. relativas al Banco de Cádiz. » 445
Código penal. . . . . » 452

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

CAPITULO PRIMERO. De los bancos comerciales é industriales. . » 455

TOM. PAG.

Sec. I. Reseña histórica de los bancos comerciales é industriales. . . . . V 454
§. 1.° Reseña histórica de los bancos comerciales é industriales estranjeros.—Banco de Venecia.—Id. de Génova.—Id. de Amsterdan.—Id. de Hamburgo.—Id de Nuremberg.—Id. de Rotterdam.—Id. de Stokolmo.—Id. de Viena.—Id. de Berlin y de Breslaw.—Id. de Rusia —Id. de Copenhague, etc.—Bancos de Inglaterra.—Id. de Escocia —Id. de Irlanda.—Banco de Francia.—Bancos de los Estados-Unidos de América.. » 454
§. 2.° Reseña hitórica de los bancos españoles.—Banco de depósito de Barcelona.—Id. de San Cárlos.—Id. español de San Fernando.—Id. de Barcelona.—Id. de Cádiz. . . . . » 477
Sec. II. Ideas generales ó teoría sobre el establecimiento y organizacion de los bancos comerciales é industriales. » 490
Sec III Del Banco Español de San Fernando. » 501
§. 1.° Constitucion del Ban-

	TOM.	PAG.
co Español de San Fernando.—Privilegios. — Capital. —Acciones. — Billetes.—Reservas.	V	504
§. 2.° Gobierno y administracion del Banco Español de San Fernando.—Junta general de accionistas.—Gobernador. — Subgobernadores.—Consejo de gabierno.—Comisiones.	»	512
§. 3.° Oficinas y empleados del Banco Español de san Fernando. — Secretaría, archivo y cartera. — Intervencion. — Caja.— Empleados.—Caja de pensiones. . .	»	526
§. 4.° Operaciones del Banco Español de san Fernando.— Descuentos. — Préstamos.—Giros —Cuentas corrientes. — Depósitos. —Contratos con el gobierno y sus dependencias.—Comercio de plata y oro.	»	538
§. 5.° Cajas subalternas ó sucursales del Banco Español de San Fernando. — Gobierno y administracion. — Operaciones.	»	547
§. 6.° Comisionados del Banco Español de San Fernando. . . .	»	551
§. 7.° Acciones jurídicas.— Tribunales competentes.	V	551
Sec. IV. Del Banco de Barcelona.	»	554
§. 1.° Constitucion del Banco de Barcelona..	»	554
§. 2.° Gobierno y administracion de id. . .	»	557
§. 3.° Operaciones de id. .	»	561
Sec. V. Del Banco de Cadiz.	»	563
§. 1.° Constitucion del Banco de Cádiz. . .	»	563
§. 2.° Gobierno y administracion de id. . .	»	565
§. 3.° Operaciones de id. .	»	568
Sec. VI. De los Bancos de Ultramar.. . . .	»	568
CAPITULO SEGUNDO. De los Bancos agrícolas, territoriales ó hipotecarios.. . .	»	573
Sec. I. Reseña histórica de las instituciones de crédito territorial y agrícola.. . .	»	574
Sec. II. Ideas generales sobre el establecimiento y organizacion de los Bancos agrícolas, territoriales ó hipotecarios..	»	586
BANDA.	»	590
BANDA.	»	590
BANDA.	»	591
BANDA (doblar de la). . .	»	591
BANDA (orden de la). . . .	»	591
BANDA (pesar de la). . . .	»	591
BANDA.	»	591
BANDERA.	»	591
BANDERA (afirmar, pedir, largar la).	»	595
BANDERA (beneficio de). .	»	595
BANDERA (derecho de..... derecho diferencial de).	»	598
BANDERA NACIONAL ESPAÑOLA, BANDERA DE		

	TOM.	PAG.
CLASES Y SERVICIOS..	V	598
BANDERA (HABILITACION DE, DERECHO DE HABILITACION DE).	»	601
BANDERA DE RECLUTA, BANDERA DE AMÉRICA	»	605
BANDERA..	»	605
BANDERAS (BENDICION, JURAMENTO, DEPOSITO DE LAS).	»	605
BANDERAS (CUARTO DE)..	»	606
BANDERAS DESPLEGADAS.	»	606
BANDERIA.	»	606
BANDERIZO.	»	606
BANDIDO.	»	606
BANDO.	»	606
BANDO, BANDOS.	»	614
BANDOLERA.	»	614
BANDOLERO.	»	615
BANIDO, BANITO, BANNITO	»	615
BAÑOS.	»	616
BAÑOS (DERECHOS SOBRE LOS).	»	629
BAÑEROS, BAÑERAS.	»	629
BAÑISTAS..	»	650
BANQUERO.	»	650
BANQUERO.	»	650
BANQUEROS..	»	650
BANQUILLO.	»	650
BANQUILLO.	»	651
BAPTISTERIO.	»	651
BAQUETAS.	»	652
BARAJA, BARAJADOR, BARAJAR..	»	655
BARAJAS..	»	655
BARANGAY.	»	655
BARATERIA..	»	655
BARATERIA EN LO JUDICIAL.	»	655
BARATERIA EN LOS CONTRATOS.	»	654
BARATERIA EN LOS JUEGOS, BARATERO.	»	654
BARATERIA DE PATRON O CAPITAN.	»	654
BARATO, BARATA.	»	655
BARBEROS.	V	655
BARBECHO.	»	656
BARCA.	»	656
BARCAJE..	»	656
BARCAZA..	»	657
BARCO.	»	657
BARCHILLA.	»	657
BARON.	»	657
BARRA.	»	657
BARRAS.	»	657
BARRAGAN.	»	657
BARRAGANA.	»	657
BARRAGANIA.	»	657
BARRAS, BARRAS DE ARAGON..	»	644
BARRAS DE PLATA.	»	644
BARRER.	»	645
BARRICA.	»	645
BARRICADAS.	»	645
BARRILLA (RENTA DE LA)..	»	645
BARRIO.	»	646
BARRUNTAS, BARRUNTES.	»	646
BASCULA DECIMAL.	»	646
BASILEA (CONCILIO Y TRATADO DE).	»	646
BASILICA.	»	646
BASILICA	»	647
BASTANTEADO..	»	649
BASTANTEAR.	»	649
BASTANTEO..	»	650
BASTANTERO.	»	650
BASTARDIA.	»	650
BASTARDO.	»	650
BASTO.	»	651
BASTON.	»	651
BATAN.	»	653
BAUTISMAL.	»	653
BAUTISMO.	»	653
BAUTISMO DEL TROPICO O DE LA LINEA.	»	653
BAUTIZO.	»	653
BAYONETA.	»	653
BEATERIO.	»	653
BEATIFICACION.	»	654
Sec. I. Historia y naturaleza de la beatificacion.	»	654

	TOM.	PAG.
SEC. II. Del procedimiento en las causas de beatificacion. . . .	V	638
§. 1.° Del procedimiento ordinario en las causas de beatificacion.	»	639
§. 2.° Del procedimiento estraordinario llamado comunmente de *casu excepto*. . .	»	666
BEATISIMO, BEATITUD.	»	667
BEBEDIZOS	»	667
BEBIDAS NOCIVAS. . . .	»	667
BECA.	»	668
BECERRO, LIBRO BECERRO.	»	670
BECERRO.	»	670
BEDEL.	»	684
BEFA.	»	685
BEGUER.	»	685
BEHETRIA.	»	685
BEHETRIA.	»	692
BENDECIR, BENDICION .	»	692
BENEFACTORIA, BENEFACTRIA, BENFETRIA.	»	696
BENEFICENCIA.	VI	5
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones posteriores á la Novísima Recopilacion. . .	»	6
Leyes de Indias.	»	11
Derecho canónico.	»	11
Legislacion estranjera. . . .	»	13
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica de la beneficencia pública.	»	19
SEC. II. De los deberes del Estado respecto á la beneficencia. .	»	32
SEC. III. Del gobierno y administracion de la beneficencia pública.	VI	3
§. 1.° Organizacion de las juntas de beneficencia. . . .	»	3
§. 2.° Atribuciones y deberes del gobierno y de sus delegados respecto de la beneficencia. . .	»	3
§. 3.° Atribuciones y deberes de las juntas de beneficencia. .	»	3
§. 4.° Gobierno interior de las juntas de beneficencia. . .	»	4
SEC. IV. De los establecimientos de beneficencia. . . .	»	4
§. 1.° Division de los establecimientos de beneficencia. . .	»	4
§. 2.° Patronato de los establecimientos de beneficencia. . .	»	5
SEC. V. De la beneficencia domiciliaria. . .	»	5
SEC. VI. De los bienes y derechos de los establecimientos de beneficencia. . .	»	6
SEC. VII. De la administracion económica de la beneficencia pública.	»	67
§. 1.° Administracion de los bienes y rentas de beneficencia. . .	»	67
§. 2.° Presupuestos. . .	»	68
§. 3.° Cuentas.	»	70
SEC. VIII. De los pobres que no están inhábiles para el trabajo. .	»	71
BENEFICIAR.	»	74
BENEFICIARIO.	»	75
BENEFICIO.	»	75
BENEFICIO DE BANDERA.	»	77

	TOM.	PAG.
BENEFICIO DE CESION DE ACCIONES.	VI	78
BENEFICIO DE CESION DE BIENES.	»	78
BENEFICIO DE COMPAÑIA.	»	78
BENEFICIO DE COMPETENCIA.	»	78
BENEFICIO DE DELIBERACION.	»	90
BENEFICIO DE DIVISION.	»	90
BENEFICIO DE ESCUSION O DE ORDEN.	»	90
BENEFICIO DE INVENTARIO.	»	90
BENEFICIO DE RESTITUCION.	»	90
BENEFICIO ECLESIASTICO.	»	91
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	92
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	97
Disposiciones posteriores.	»	117
Leyes de Indias.	»	128
Derecho canónico.	»	138
Legislacion estranjera.	»	189
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Introduccion histórica.	»	192
SEC. II. De la naturaleza y cualidades de los beneficios eclesiásticos.	»	202
§. 1.° Perpetuidad.	»	202
§. 2.° Unidad de los beneficios eclesiásticos.	»	203
§. 3.° Residencia.	»	211
SEC. III. De la division y distribucion de los beneficios eclesiásticos.	»	217
SEC. IV. De la conservacion, aumento y disminucion de los beneficios eclesiásticos.	VI	233
§. 1.° Creacion de los beneficios.	»	234
§. 2.° Creacion y division de los beneficios parroquiales.	»	235
§. 3.° De la supresion y union de los beneficios.	»	245
§. 4.° De la supresion, union é incorporacion de oficios á las mesas episcopal y capitular, á los Seminarios conciliares, cabildos exentos y monasterios.	»	247
§. 5.° De la supresion y union de unos oficios á otros.	»	251
§. 6.° Supresion y union de los beneficios no curados.	»	256
§. 7.° De la restauracion de los oficios.	»	258
SEC. V. Modos de adquirir los beneficios eclesiásticos.	»	259
§. 1.° Derecho de los ordinarios.	»	260
§. 2.° Facultades de los cabildos de catedrales y colegiatas.	»	262
§. 3.° Derecho del Pontífice.	»	267
§. 4.° Derecho de los reyes de España.	»	279
§. 5.° Del derecho de conferir los beneficios eclesiásticos por título especial ó por devolucion.	»	285
§. 6.° Reglas generales que deben observarse		

	TOM.	PAG.
en la provision de los beneficios eclesiásticos. . . .	VI	291
§. 7.° Forma ordinaria de provision. . . .	»	303
§. 8.° Forma de provision por concurso. . .	»	309
§. 9.° Forma de provision apostólica. . . .	»	337
§. 10.° De la institucion canónica y de la posesion.	»	349
§. 11.° De los derechos en la provision de beneficios.	»	361
Sec. VI. Derechos y cargas de los beneficiados.	»	369
Sec. VII. Modos de perder los beneficios eclesiásticos.	»	372
Sec. VIII. De las causas beneficiales. . . .	»	373
§. 1.° Del procedimiento gubernativo en negocios beneficiales.	»	374
§. 2.° Del procedimiento judicial en beneficios litigiosos. .	»	377
§. 3.° Del modo de probar el mejor derecho para proveer beneficios.	»	383
§. 4.° Del procedimiento sobre mejor derecho á la obtencion de un beneficio de fundacion particular.	»	386
BENEFICIO (oficinas de).	»	390
BENEFICO.	»	392
BENEMERITO.	»	393
BENEPLACITO.	»	394
BERBERIA (estados o gobiernos de). **BERBERISCOS**.	»	394
BERNARDO (orden militar de san).	VI	395
BES.	»	395
BESA LA MANO.	»	395
BESAMANOS.	»	395
BESAMANOS DE TRIBUNALES Y CONSEJOS. . .	»	399
BESANT.	»	401
BESANTE.	»	401
BESAR. BESO.	»	401
BESO ESPONSALICIO. . .	»	402
BESO ESFORZADO. . . .	»	410
BESO DE HOMENAGE. .	»	410
BESO DE PAZ.	»	411
BESO PENAL.	»	411
BESO DEL PIÉ.	»	411
BESO DE VASALLAGE. .	»	412
BESTIAS.	»	413
BESTIAS FEROCES (pena de ser arrojado a las: luchas con las).	»	414
BESTIARIO.	»	416
BESTIAGE (contribucion).	»	417
BESTIALIDAD.	»	418
BIBLIA.	»	423
BIBLIOTECA.	»	430
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica y estado actual de las bibliotecas. .	»	432
Sec. II. Institucion, conservacion, fomento y uso de las bibliotecas.	»	436
§. 1.° Institucion y conservacion de las bibliotecas. . . .	»	437
§. 2.° Fomento de las bibliotecas. . . .	»	469
§. 3.° Uso de las bibliotecas.	»	479
Sec. III. Cualidades y deberes de los empleados en bibliotecas.	»	487
BIEN.	»	494

	TOM.	PAG.
BIENES.	VI	495
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	495
Legislacion estranjera. . . .	»	496
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. De los bienes considerados en general y de sus diferentes especies. . . .	»	499
CAPITULO SEGUNDO. De los bienes muebles é inmuebles. . . .	»	503
SEC. I. De los bienes inmuebles. . . .	»	504
§. 1.° De los bienes inmuebles por su naturaleza.	»	504
§. 2.° De los bienes que se reputan inmuebles por el uso á que están destinados. .	»	509
§. 3.° De los bienes que se reputan inmuebles por el objeto á que tienen aplicacion.	»	514
SEC. II. De los bienes muebles.	»	515
SEC. III. De los bienes corporales é incorporales.	»	520
SEC. IV. De los bienes fungibles y no fungibles.	»	521
CAPITULO TERCERO. De los bienes considerados con relacion á las personas á quienes pertenecen. . .	»	523
SEC. I. De los bienes de la nacion ó que constituyen el dominio público de ella. .	»	523
SEC. II. De los bienes del Estado ó que constituyen la propiedad del Estado.	VI	524
SEC. III. De los bienes que constituyen el patrimonio real ó el patrimonio de la corona.	»	525
SEC. IV. De los bienes pertenecientes á los pueblos, á las corporaciones y establecimientos públicos	»	526
SEC. V. De los bienes pertenecientes á los particulares. . .	»	528
CAPITULO CUARTO. De los derechos que pueden adquirirse sobre los bienes jurídicamente considerados.	»	528
CAPITULO QUINTO. De los medios de adquirir y perder los derechos que pueden tenerse sobre los bienes.	«	530
SEC. I. De los medios de adquirir segun las reglas del derecho de gentes.	»	530
SEC. II. De los medios de adquirir segun las reglas del derecho civil.	»	532
BIENES DE ABADENGO. .	»	533
BIENES AB-INTESTATO O AB-INTESTATOS. . . .	»	533
BIENES DE ABOLENGO. .	»	533
BIENES ACENSUADOS. .	»	533
BIENES ADVENTICIOS. .	»	533
BIENES ALODIALES. . .	»	533
BIENES ANTIFERNALES.	»	533
BIENES CASTRENSES. .	»	533
BIENES CUASI CASTREN-		

	TOM.	PAG.
SES.	VI	533
BIENES COMUNALES O CONCEJILES.	»	533
BIENES COMUNES. . . .	»	533
BIENES DE COMUNIDAD DE INDIOS.	»	534
BIENES CORPORALES. .	»	538
BIENES DE DIFUNTOS (JUZGADOS DE.... ADMINISTRACION DE...)	»	538
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Consideraciones generales sobre la institucion del juzgado privativo y administracion pública especial de los bienes de difuntos: sus inconvenientes y ventajas.	»	539
SEC. II. Jurisdiccion privativa sobre bienes de difuntos. . .	»	543
§. 1.° Establecimiento, organizacion y vicisitudes del juzgado general de bienes de difuntos. .	»	543
§. 2.° Competencia del juzgado privativo de bienes de difuntos y casos de escepcion.	»	546
§. 3.° Atribuciones judiciales y administrativas del juzgado general, y formalidades á que debe atenerse. De los delegados y del juez general. . .	»	551
§. 4.° Del defensor general y solicitador de bienes de difuntos.	»	554
§. 5.° De los poderes y requisitos necesarios en los particulares para ser parte, y percibir bienes de difuntos.	VI	554
SEC. III. De la administracion judicial y económica ó por el Estado, de los bienes de difuntos: traslacion y entrega de caudales. . .	»	556
§. 1.° Administracion judicial y económica de bienes de difuntos en Indias. . .	»	556
§. 2.° De la traslacion de caudales de bienes de difuntos. .	»	559
§. 3.° Administracion y pago de caudales y bienes de difuntos en España. . . .	»	560
BIENES DOTALES. . . .	»	562
BIENES ECLESIASTICOS.	»	562
BIENES ENFEUDADOS. .	»	562
BIENES ESPIRITUALIZADOS.	»	562
BIENES ESTABLES. . .	»	562
BIENES DEL ESTADO. .	»	562
BIENES DE ESTRANJEROS.	»	563
BIENES FISCALES. . . .	»	563
BIENES FORALES. BIENES DADOS EN FORO. FOROS.	»	563
BIENES FUNGIBLES. . .	»	563
BIENES NO FUNGIBLES. .	»	563
BIENES GANANCIALES. .	»	563
BIENES HEREDITARIOS.	»	563
BIENES INCORPORALES.	»	563
BIENES INDIVIDUOS. BIENES DE INCOMODA DIVISION.	»	563
BIENES INMUEBLES. . .	»	564
BIENES MOSTRENCOS. .	»	564

	TOM.	PAG.
BIENES MUEBLES.	VI	564
BIENES NACIONALES.	»	564
BIENES DE NINGUNO.	»	564
BIENES PARAFERNALES.	»	564
BIENES PARTICULARES O BIENES DE PARTICULARES.	»	564
BIENES PATRIMONIALES.	»	564
BIENES PECULIARES.	»	565
BIENES PROFECTICIOS.	»	565
BIENES PROPIOS.	»	565
BIENES DE PROPIOS.	»	565
BIENES PUBLICOS.	»	565
BIENES RAICES.	»	565
BIENES RESERVABLES, BIENES SUJETOS A RESERVA O RESERVACION.	»	565
BIENES SECULARIZADOS.	»	565
BIENES SEDIENTES, BIENES SITIOS, BIENES SITOS.	»	567
BIENES SEMOVIENTES.	»	567
BIENES SEÑORIALES.	»	567
BIENES TRONCALES.	»	567
BIENES SITUADOS EN ULTRAMAR.	»	567
BIENES VACANTES.	»	568
BIENES VINCULADOS.	»	568
BIENES VENDIDOS DE HOSPITALES, CASAS DE MISERICORDIA Y DE ESPOSITOS, COFRADIAS, OBRAS PIAS Y PATRONATOS DE LEGOS, ETC.	»	569
BIENES VENDIDOS DE MAYORAZGOS, VINCULOS Y PATRONATOS DE LEGOS.	»	570
BIENFETRIA.	»	571
BIGAMIA, BIGAMO.	»	571
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Fuero Juzgo.	»	572
Leyes de las Partidas.	VI	572
Novísima Recopilacion.	»	573
Código penal.	»	574
Derecho canónico.	»	574
Legislacion estranjera.	»	574
PARTE DOCTRINAL.		
SEC. ÚNICA. Carácter y elementos del crímen de bigamia, complicidad, competencia, penas y efectos.	»	577
BIGARDO.	»	588
BILANCE.	»	588
BILATERAL.	»	588
BILBAO (ORDENANZAS DE).	»	588
BILLETE DE BANCO.	»	589
BILLETE A LA ORDEN.	»	589
BILLETES DEL TESORO.	»	589
BIRRETE.	»	590
BISABUELO.	»	591
BISIESTO (AÑO).	»	591
BITACORA (CUADERNO DE).	»	592
BIZNIETO.	»	592
BLANCA, BLANCAS.	»	593
BLANCO, BLANCOS.	»	593
BLASFEMIA.	»	593
BLASON.	»	605
BLOQUEO.	»	605
BOALAJE.	»	607
BOALAR.	»	607
BOLAJE.	»	607
BODA (CONTRIBUCION).	»	607
BODEGA (CONTRIBUCION).	»	607
BOFETON.	»	607
BOLETIN.	»	608
BOLETIN OFICIAL.	»	608
BOLIÑA.	»	609
BOLSAS DE COMERCIO.	»	609
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones posteriores á la Novísima Recopilacion.	»	609
Legislacion estranjera.	»	620
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
CAPITULO PRIMERO. Reseña		

	TOM.	PAG.
histórica. . .	VI	626
CAPITULO SEGUNDO. De las Bolsas de comercio en general, sus ventajas é inconvenientes. . .	»	633
CAPITULO TERCERO. De la Bolsa de comercio de Madrid. . . .	»	645
SEC. I. Establecimiento de la Bolsa de Madrid. Su régimen interior. —Funcionarios.—Dependientes.	»	643
SEC. II. De las reuniones de la Bolsa. —Personas incapacitadas de concurrir. — Forma en que deben celebrarse .	»	646
SEC. III. De los contratos que pueden ejecutarse en la Bolsa de Madrid.	»	652
§. 1.° Objetos sobre que recaen los contratos que se ejecutan en la Bolsa de Madrid.	»	652
§. 2.° Forma y circunstancias con que deben celebrarse los contratos en la Bolsa de Madrid.	»	656
§. 3.° Efectos que producen los contratos que tienen lugar en la Bolsa de Madrid.	»	659
SEC. IV. De las operaciones que no pueden ejecutarse en la Bolsa de Madrid.	»	660
§. 1.° Operaciones á plazo y sus diferentes especies.	»	661
§. 2.° Formas y circunstancias de las operaciones á plazo. .	VI	669
§. 3.° Efectos y cumplimiento de las operaciones á plazo. . .	»	670
SEC. V. De la cotizacion oficial.	»	671
SEC. VI. De los agentes de cambio.. . . .	»	674
§. 1.° Consideraciones generales. . . .	»	675
§. 2.° Carácter especial de los agentes de cambio.. . . .	»	678
§. 3.° Nombramiento de los agentes de cambio.	»	680
§. 4.° Atribuciones propias de los agentes de cambio. . . .	»	681
§. 5.° Obligaciones impuestas á los agentes de cambios. . .	»	685
§. 6.° Prohibiciones hechas á los agentes de cambios. . . .	»	686
§. 7.° Derechos y prerogativas de los agentes de cambios. .	»	687
§. 8.° De la responsabilidad de los agentes de cambios. . . .	»	690
SEC. VII. De la junta sindical.	»	694
BOLLA.	»	695
BOLLA DE NAIPES. . . .	»	696
BONETE.	»	696
BORDE.	»	697
BORLA.	»	697
BORRA.	»	698
BORRACHO.	»	698
BOSQUES.	»	698
BOTANICA.	»	699
BOTICARIO.	»	699
BOTILLA (CONTRIBUCION). .	»	699
BOTILLERIA.	»	699
BOVAGE.	»	699
BOYA.	»	700

	TOM.	PAG.
BRACEAGE (DERECHO DE).	VI	700
BRACERO.	»	700
BRAZA.	»	700
BRAZADA.	»	700
BRAZADO.	»	700
BRAZOS DEL REINO. . .	»	700
BRAZO ECLESIASTICO. .	»	702
BRAZO SECULAR O REAL.	»	702
BREVE.	»	702
BREVIARIO (COLECCIONES CANONICAS).	»	704
BREVIARIO ANIANO. . .	»	706
BRIGADA.	»	707
BRIGADIER.	»	707
BUENA FE.	»	710
BUENA PRO.	»	711
BUEY DE MARZO (CONTRIBUCION).	»	711
BUHONEROS.	»	711
BULA.	»	711
SEC. ÚNICA. De las clases principales de bulas pontificias. — Requisitos prévios á su espedicion. — Sus solemnidades internas y esternas. — Sus efectos. — Su prelacion.—Su autenticidad.—Su promulgacion y publicacion.-Su ejecucion. . . .	VI	712
BULA APOSTOLICI MINISTERII.	»	715
BULA DE CARNE.	»	719
BULA DE COMPOSICION.	»	719
BULA DE CRUZADA. . .	»	719
BULA IN CŒNA DOMINI. .	»	722
BULA DE DIFUNTOS. . .	»	724
BULA DE LACTICINIOS.	»	724
BULA DE ORO.	»	724
BULARIO.	»	725
BULETTO.	»	728
BUQUE.	»	728
BUQUES NEGREROS. . .	»	728
BUREO.	»	729
BUZO.	»	731

C

	TOM.	PAG.
C.	VII	5
CABALA.	»	5
CABALGADA.	»	6
CABALLERATO.	»	6
CABALLERIA.	»	7
CABALLERIAS.	»	7
CABALLERIAS (como tributo).	»	7
CABALLERIZA REAL.	»	7
CABALLERIZO.	»	8
CABALLERIZO MAYOR DEL REY.	»	8
CABALLERO.	»	9
CABALLOS.	»	16
CABAÑA.	»	16
CABAÑA REAL DE CARRETEROS.	»	16
CABAÑA REAL DE GANADEROS.	»	17
CABAÑA SERVICIADA.	»	17
CABECERA.	»	17
CABEZA.	»	18
CABEZA DE BARANGAY.	»	18
CABEZA DE CASA O LINAGE.	»	18
CABEZA DE BANDO O MOTIN.	»	18
CABEZA DE PARTIDO.	»	19
CABEZA DE PROCESO.	»	19
CABEZA DE SENTENCIA.	»	19
CABEZA DE TESTAMENTO.	»	19
CABEZA MANSA.	VII	19
CABEZAJE DE MORO.	»	19
CABEZALERIA: CABEZALERO.	»	19
CABILDO.	»	19
CABILDO ECLESIASTICO.	»	19
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	20
Sec. II. Organizacion de los cabildos y carácter canónico de los mismos.	»	26
Sec. III. Derechos de los cabildos en sede plena y vacante.	»	30
§. 1.° Derechos de los cabildos en sede plena.	»	30
§. 2.° Derechos de los cabildos en sede vacante.	»	33
Sec. IV. De la convocacion y reunion de los cabildos.	»	40
CABILDOS DE INDIAS.	»	46
CABLES.	»	51
CABLIEVA.	»	51
CABDILLO.	»	52
CABO.	»	52
CABO DE ESCUADRA.	»	52
CABO (segundo cabo.)	»	53

	TOM.	PAG.
CABO DE VARA.	VII	55
CABOTAJE (COMERCIO DE).	»	56
CABREO.	»	56
CABREVACION: CABREVE.	»	56
CABRON.	»	57
CACIQUE.	»	58
CADALSO.	»	59
CADAVER.	»	59
CADENA.	»	63
CADENA (PENA DE).	»	64
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	64
SEC. II. Naturaleza y circunstancias de la pena de de cadena.	»	69
SEC. III. Penas accesorias de la de cadena.	»	79
SEC. IV. Variaciones que puede sufrir la pena de cadena.	»	83
CADETE.	»	92
CADUCAR: CADUCIDAD.	»	92
CAFES.	»	92
CAHIZ.	»	92
CAIDOS.	»	93
CAJA.	»	93
CAJA DE AHORROS.	»	93
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones vigentes.	»	93
Legislacion estranjera.	»	97
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	101
SEC. II. Ideas generales sobre la organizacion de las cajas de ahorros.	»	104
SEC. III. Estado actual de las cajas de ahorros en España á virtud de la última reforma.	VII	106
CAJA DE AMORTIZACION.	»	106
CAJAS DE COMUNIDAD DE INDIOS.	»	109
CAJA DE CONSOLIDACION.	»	109
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS.	»	110
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones vigentes.	»	110
Legislacion estranjera.	»	115
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	117
SEC. II. De la caja general de depósitos, su carácter y naturaleza.	»	120
SEC. III. De las operaciones de la caja general de depósitos y de las formalidades con que debe procederse en ellas.	»	121
§. 1.° De los depósitos necesarios.	»	122
§. 2.° De los depósitos voluntarios.	»	125
§. 3.° De las cuentas corrientes.	»	127
SEC. IV. De las garantías y privilegios de los depósitos y cuentas corrientes.	»	128
SEC. V. Del destino que debe dar la caja á los fondos y efectos que recibe en depósito y cuenta corriente.	»	129
SEC. VI. De la administracion de la caja general de depósitos, su inspeccion y		

	TOM.	PAG.
responsabilidad. .	VII	130
SEC. VII. De las sucursales de la caja general de depósitos. .	»	134
§. 1.° De las operaciones de las sucursales. .	»	135
§. 2.° De la administracion de las sucursales.	»	136
SEC. VIII. De las cajas de depósitos en Ultramar.	»	136
CAJAS DE DESCUENTO Y REDUCCION DE VALES.	»	139
CAJA DE FONDOS. . . .	»	140
CAJA DE QUINTOS. . . .	»	140
CAJAS REALES.	»	140
CAJERO.	»	142
CALABOZO.	»	142
CALAFATES Y CARPINTEROS.	»	142
CALATRAVA (ORDEN MILITAR DE).	»	142
CALCEDONIA (CONCILIO DE)	»	142
CALDARIA (PRUEBA). . .	»	142
CALDERAS Y ALAMBIQUES.	»	142
CALDOS.	»	143
CALENDA.	»	143
CALENDARIO.	»	143
CALENDAS.	»	145
CALICATA.	»	146
CALICES (FUNCION DE LOS).	»	149
CALIDAD.	»	149
CALIFICAR.	»	149
CALIZ.	»	150
CALOÑA.	»	151
CALUMNIA..	»	151
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Exámen del derecho español anterior al Código penal vigente y de la legislacion estranjera respecto de la calumnia. . . .	VII	151
SEC. II. De la calumnia y sus especies con arreglo al Código penal.	»	156
SEC. III. Condiciones esenciales del delito de calumnia. . . .	»	160
SEC. IV. Acusacion. — Penas. —Satisfaccion al ofendido. . . .	»	164
CALUMNIA (SEGUN EL DERECHO CANONICO).	»	169
CALUMNIADOR.	»	170
CALZA.	»	171
CALZADA.	»	171
CALLAR.	»	171
CALLE.	»	173
CAMA.	»	173
CAMADA.	»	175
CAMARA.	»	174
CAMARA (ANTE-CAMARA). .	»	174
CAMARA (AYUDA DE). . .	»	174
CAMARA APOSTOLICA. .	»	175
CAMARA DE CASTILLA. .	»	175
CAMARA (CONSEJO DE LA). .	»	175
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SECCION ÚNICA.	»	175
§. 1.° Reseña histórica. .	»	176
§. 2.° Atribuciones en el órden civil. . . .	»	191
§. 3.° Atribuciones en el órden eclesiástico. .	»	191
§. 4.° Modo de proceder la cámara respecto de las providencias de los prelados ordinarios en los asuntos espirituales y eclesiásticos del patronato, que habian menester del real asenso. . . .	»	195
§. 5.° Derecho de avocacion,		

	TOM.	PAG.
exámen y retencion ejercido por la cámara. . .	VII	196
§. 6.° Jueces y tribunales delegados de la cámara. . . .	»	199
CAMARA DE COMPTOS. .	»	202
CAMARA ECLESIASTICA (CONSEJO DE LA).	»	203
CAMARA DE GUERRA. . .	»	207
CAMARA DE INDIAS. . .	»	208
CAMARA (PEVAS DE). . .	»	209
CAMARA REAL.	»	209
CAMARA DEL REY. . . .	»	213
CAMARA DE ULTRAMAR.	»	213
CAMARAJE.	»	214
CAMARAS.	»	214

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Clasificacion de las cámaras ó asambleas políticas por razon de su orígen y duracion: de la índole constitucional de las mismas: de sus elementos constitutivos. . . .	»	216
SEC. II. De la unidad y pluralidad de cámaras.	»	221
SEC. III. De las cámaras ó asambleas políticas bajo el punto de vista de sus facultades y preeminencias. . . .	»	224
SEC. IV. De las cámaras ó asambleas políticas bajo el punto de vista del ejercicio de sus funciones.	»	226
CAMARERA.	»	234
CAMARERA MAYOR. . .	»	234

	TOM.	PAG.
CAMARERIA.	VII	235
CAMARERO.	»	235
CAMARERO DEL REY: CAMARERO MAYOR. .	»	235
CAMARILLA.	»	235
CAMARISTA.	»	235
CAMARLENGO.	»	235
CAMBIADOR: CAMBISTA.	»	235
CAMBIANTE.	»	235
CAMBIATARIO.	»	235
CAMBIO.	»	235
CAMINANTES.	»	236
CAMINEROS.	»	237
CAMINOS.	»	237

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

Leyes de Partida.	»	238
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	239
Disposiciones posteriores. . .	»	242
Legislacion estranjera. . . .	»	268

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Reseña histórica. .	»	275
SEC. II. Importancia y necesidad social de los caminos. . .	»	290
SEC. III. Del carácter, naturaleza y division de los caminos. .	»	295
SEC. IV. De las carreteras. .	»	301
§. 1.° Carreteras generales.	»	301
§. 2.° Carreteras trasversales.	»	303
§. 3.° Carreteras provinciales.	»	308
§. 4.° Carreteras locales. .	»	311
§. 5.° Disposiciones relativas á diferentes especies de carreteras.	»	316
§. 6.° De las travesías de las carreteras por los pueblos. . .	»	325
SEC. V. De los caminos ve-		

	TOM.	PAG.
cinales. . . .	VII	339
§. 1.° Clasificacion de caminos vecinales y su construccion en general. . . .	»	340
§. 2.° Recursos para la construccion y conservacion de los caminos vecinales. .	»	330
§. 3.° Ejecucion de las obras de caminos vecinales.	»	367
Sec. VI. De la conservacion y policía de los caminos. . . .	»	379
§. 1.° Conservacion de los caminos. . . .	»	580
§. 2.° Libertad del tráneito.	»	384
§. 3.° Seguridad del tránsito.	»	388
§. 4.° Restricciones en el uso de los caminos.	»	389
§. 5.° Penalidad por la contravencion á las reglas y ordenanzas de caminos. .	»	390
Sec. VII. Organizacion administrativa del ramo de caminos. .	»	391
Sec. VIII. De los caminos privados.	»	395
CAMINOS DE HIERRO. .	»	396
CAMINOS CAUDALES. . .	»	396
CAMINOS (CELADORES, DIRECCION GENERAL, DIRECTORES, INGENIEROS, INSPECTORES DE).	»	397
CAMINOS EN ULTRAMAR.	»	397
CAMPANA.	»	399
CAMPANAS.	»	400
CAMPAÑA: SERVICIO DE CAMPAÑA, ETC. . . .	»	405
CAMPEON.	»	406
CAMPEROS.	»	406
CAMPIÑA.	»	407
CAMPO.	»	407
CAMPO DE BATALLA Y SIMPLEMENTE CAMPO.	VII	408
CAMPO.	»	408
CAMPO DEL HONOR. . .	»	408
CAMPO SANTO.	»	408
CANAL.	»	408
CANAL DE CASTILLA .	»	409
CANAL IMPERIAL DE ARAGON.	»	410
CANAL DE ISABEL II. .	»	412
CANAL DE MANZANARES.	»	413
CANAL DE TAUSTE. . .	»	413
CANALIZACION DEL EBRO.	»	414
CANALONES.	»	415
CANARIAS.	»	415
CANCEL.	»	416
CANCELACION: CANCELAR.	»	416
CANCELACION DE CREDITOS CONTRA EL ESTADO.	»	417
CANCELADURA: CANCELAMIENTO.	»	418
CANCELARIA.	»	418
CANCELARIA ROMANA. .	»	418
CANCELARIO.	»	436
CANCILLER.	»	437
CANCILLER DE CASTILLA.	»	440
CANCILLER DE CONTENCIONES.	»	441
CANCILLER EN EL ORDEN DIPLOMATICO. . .	»	442
CANCILLER DE IGLESIA.	»	442
CANCILLER: GRAN CANCILLER DE INDIAS. .	»	442
CANCILLER DE JUSTICIA O DE LOS TRIBUNALES.	»	442
CANCILLER DE LAS ORDENES.	»	445
CANCILLER REGISTRADOR.	»	445
CANCILLER DEL SELLO DE LA PURIDAD. . .	»	444
CANCILLERIA.	»	444
CANDELAS.	»	446

	TOM.	PAG.
CANDELA.	VII	447
CANDELARRO SEPTENO.	»	447
CANDIDATO.	»	447
CANON.	»	448
CANONES.	»	449
CANONES (FACULTAD DE). .	»	449
CANONES DE LOS APOSTOLES: CANONES PENITENCIALES.	»	450
CANONESAS.	»	450
CANONGIA: CANONICATO.	»	451
CANONICO.	»	452
CANONIGO.	»	452
CANONIZACION.	»	471
CANTAR: CANCION: CANTIGA.	»	473
CANTAR LA PALINODIA.	»	474
CANTERA.	»	475
CANTINA.	»	475
CANTO ECLESIASTICO. .	»	476
CANTOR.	»	477
CANTARES DESHONESTOS, ESCANDALOSOS, INJURIOSOS.	»	477
CAÑADA.	»	478
CAÑAMA.	»	478
CAPA (DERECHO DE). . . .	»	479
CAPA.	»	479
CAPA Y ESPADA (CORREGIDORES DE).	»	480
CAPACIDAD.	»	480
CAPACIDADES.	»	482
CAPATAZ DE BRIGADA.	»	483
CAPATACES MINEROS DE ASTURIAS.	»	484
CAPCIOSIDAD: CAPCIOSO.	»	484
CAPELO.	»	484
CAPELLAN.	»	485
CAPELLAN DE ALTAR. .	»	486
CAPELLAN DE LA ARMADA.	»	486
CAPELLAN DE EJERCITO.	»	491
CAPELLAN DE COFRADIA.	»	499
CAPELLAN DE HONOR. .	»	500
CAPELLAN MAYOR. . .	VII	500
CAPELLAN MAYOR DE LOS EJERCITOS. . . .	»	500
CAPELLAN MAYOR DEL REY.	»	500
CAPELLAN DE MONJAS.	»	500
CAPELLAN MUZARABE. .	»	501
CAPELLAN REAL. . . .	»	501
CAPELLANES DE CORO.	»	501
CAPELLANES DE PARTICULARES.	»	501
CAPELLANES DE PRESIDIOS.	»	501
CAPELLANIA.	»	502
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	502
Disposiciones posteriores. . .	»	503
Leyes de Indias.	»	507
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	508
SEC. II. Naturaleza de las capellanías en general, y su diferencia de otras instituciones canónicas ó civiles.	»	512
SEC. III. Diversas clases de capellanías, y principalmente de las eclesiásticas y laicales.	»	515
§. 1.° De las capellanías eclesiásticas. . .	»	516
§. 2.° De las capellanías laicales.	»	520
§. 3.° Consideraciones comunes á las capellanías eclesiásticas y laicales. . .	»	523
SEC. IV. De los requisitos para la fundacion y obtencion de las ca-		

	TOM.	PAG.
pellanías. . . .	VII	528
Sec. V. De las obligaciones y derechos de los poseedores de capellanías.—De la remocion del capellan.	»	537
§. 1.° Obligaciones y derechos de los capellanes.	»	537
§. 2.° De la remocion del capellan.	»	541
Sec. VI. De la supresion y union, alteracion y traslacion de una capellanía. . . .	»	544
Sec. VII. Estado de la legislacion canónica y civil sobre capellanías en España. .	»	547
Sec. VIII. De los recursos y procedimientos sobre capellanías. .	»	558
APÉNDICE AL ARTÍCULO CAPELLANIA.	»	561
Parte legislativa.	»	563
Parte doctrinal.	»	563
Cuestiones generales. . . .	»	592
CAPILLA.	»	599
CAPILLA ARDIENTE. . .	»	602
CAPILLA DE MUSICA. .	»	602
CAPILLA (COMO SOLEMNIDAD). **CAPILLA PAPAL.**	»	602
CAPILLA REAL: CAPILLAS REALES.	»	603
CAPILLA DE LOS REOS.	»	617
CAPILLA MUZARABE. . .	»	619
CAPISCOL.	»	620
CAPITACION.	»	620
CAPITAL (EN SENTIDO ECONOMICO).	»	622
CAPITAL (EN LO TERRITORIAL).	»	624
CAPITALISTA.	»	626
CAPITALIZAR: CAPITALIZACION.	»	627
CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DE LA DEUDA CONSOLIDADA INTERIOR Y ESTERIOR.	VII	627
CAPITALIZACION DE VITALICIOS Y DE OTRAS CLASES DE PENSIONES SOBRE LOS FONDOS DEL ESTADO.	»	630
CAPITAN.	»	633
CAPITAN DE BANDIDOS: DE BANDOLEROS: DE MALHECHORES. . . .	»	633
CAPITAN.	»	633
CAPITAN DE FRAGATA. .	»	634
CAPITAN GENERAL DE EJERCITO.	»	634
CAPITAN GENERAL DE EJERCITO.	»	638
CAPITAN GENERAL DE LA ARMADA.	»	640
CAPITAN GENERAL DE PROVINCIA.	»	640
CAPITAN GENERAL DE DEPARTAMENTO. . . .	»	642
CAPITAN A GUERRA. . .	»	642
CAPITAN DE LLAVES. .	»	643
CAPITAN DE NAVE. . . .	»	644
CAPITAN DE NAVIO. . .	»	653
CAPITAN DE PARTIDO.	»	653
CAPITAN DE PUERTO. .	»	655
CAPITANA.	»	657
CAPITANES A GUERRA (EN ULTRAMAR).	»	657
CAPITANES APROBANTES.	»	658
CAPITANES GENERALES (EN ULTRAMAR).	»	658
CAPITANIA GENERAL DE PROVINCIA.	»	659
CAPITULACION: CAPITULAR.	»	660
CAPITULACION (EN LO MILITAR).	»	660
CAPITULACIONES MATRIMONIALES.	»	664
CAPITULARES.	»	665
CAPITULO.	»	668

	TOM.	PAG.
CAPTACION: CAPTATORIO.	VII	668
CAPTURA.	»	670
CARA DEL HOMBRE.	»	670
CARABINA.	»	672
CARABINEROS.	»	672
CARCEL.	»	673
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	676
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	676
Disposiciones posteriores.	»	678
Legislacion estranjera.	»	690
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales sobre el orígen de las cárceles: derecho y fines de la sociedad política en su erección.	»	692
Sec. II. Bases fundamentales de un buen sistema carcelario, en que se concilien los fines de la sociedad política con la humanidad.	»	697
§. 1.° Seguridad.	»	698
§. 2.° Salubridad.	»	700
§. 3.° Moralidad.	»	701
§. 4.° Régimen administrativo interior.	»	701
Sec. III. De nuestras cárceles: autoridades de que han dependido y dependen.	»	703
Sec. IV. Quebrantamiento de cárceles.	»	706
Sec. V. Visitas de cárceles.	»	711
CARCEL DE CORONA.	»	714
CARCEL DE MANIFESTADOS.	»	714
CARCELAJE.	VII	715
CARCELERIA.	»	715
CARCELERO.	»	715
CARDENAL: CARDENALES.	»	716
CARDENALATO.	»	722
CARDENALES DE LA CORONA.	»	722
CAREAR: CAREO.	»	723
CARENA: CARENAR.	»	723
CARGA.	»	727
CARGA Y DESCARGA.	»	728
CARGADO Y REGALIA.	»	729
CARGADOR DE MERCADERIAS.	»	729
CARGADOR DE NAVE.	»	729
CARGAREME.	»	730
CARGAS EN LOS BENEFICIOS Y OTRAS FUNDACIONES PERPETUAS.	»	731
CARGAS CONCEJILES.	»	732
CARGAS DE JUSTICIA.	»	733
CARGAS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.	»	733
CARGO.	»	734
CARICATURA.	»	734
CARIDAD.	»	734
CARNAL.	»	736
CARNAVAL.	»	736
CARNECERIAS.	»	736
CARNERAJE.	»	736
CARNES: CARNESTOLENDAS.	»	736
CARRERA.	»	736
CARRERA: CARRIL.	»	736
CARRETA: CARRO.	»	737
CARRETERA.	»	737
CARRETERIA: CARRETEROS.	»	737
CARRUAJES.	»	737
CARTA.	»	738
CARTA CONSTITUCIONAL.	»	741
CARTA DESAFORADA.	»	741
CARTA DE DOTE.	»	742
CARTA EJECUTORIA.	»	742
CARTA FORERA.	»	745

	TOM.	PAG.
CARTA FORMADA.	VII	744
CARTA DE GRACIA.	»	744
CARTA DE LASTO.	»	744
CARTA DE NATURALEZA.	»	745
CARTA-ORDEN.	»	745
CARTA-ORDEN DE CREDITO: CARTA DE CREDITO.	»	746
CARTA DE PAGO.	»	747
CARTA DE PAGO.	»	747
CARTA PARTIDA POR A. B. C.	»	748
CARTA PLOMADA.	»	748
CARTA DE PORTE.	»	749
CARTA PUEBLA.	»	749
CARTA DE RECOMENDACION.	»	749
CARTA DE SEGURIDAD.	»	749
CARTA SUCESORIA.	»	749
CARTA DE VECINDAD.	»	749
CARTAS EN ASUNTOS DE COMERCIO.	»	750
CARTEL.	»	750
CARTERO.	»	750
CARTILLA.	»	750
CARTULARIO.	»	750
CASA.	»	750
CASA CABEZA DE ARMERIA.	»	751
CASA CAÑAMA.	»	751
CASAS DE CONTRATACION.	»	751
CASAS DE CORRECCION.	»	754
CASA ESCUSADA.	»	759
CASA FUERTE.	»	759
CASA DE GANADEROS.	»	759
CASAS DE JUEGO.	»	759
CASAS DE LOCOS.	»	764
CASA A LA MALICIA.	»	767
CASAS DE MATERNIDAD.	»	767
CASAS DE MONEDA.	»	769
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	769
SEC. II. Organizacion y régimen de las casas de moneda.	VII	775
SEC. III. De la fabricacion y acuñacion de la moneda.	»	784
SEC. IV. Del departamento del grabado, y construccion de instrumentos y máquinas para la moneda.	»	787
CASA PUBLICA.	»	794
CASA REAL.	»	794
CASA SOLARIEGA.	»	796
CASACION.	»	796
§. 1.° Recursos de casacion en las causas de contrabando y defraudacion á la Hacienda pública.	»	800
§. 2.° Recursos de casacion ó nulidad en los pleitos de Ultramar.	»	814
CASADOS.	»	828
CASAMIENTO.	»	828
CASAR (DE CASA).	»	828
CASAR.	»	829
CASO.	»	829
CASO DE CORTE.	»	829
CASO FORTUITO.	»	833
CASO INCIERTO.	»	857
CASOS RESERVADOS.	»	857
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Doctrina general sobre casos reservados: fundamento, orígen, y vicisitudes de la facultad de reservar la absolucion penitencial en casos determinados.	»	838
SEC. II. Potestades y superiores eclesiásticos á quienes compete el		

	TOM.	PAG.
derecho jurisdiccional de hacer reservas: casos específicos de estas. .	VII	843
§. 1.° De los casos reservados al Papa. . .	»	843
§. 2.° De los casos reservados á los obispos.	»	846
§. 3.° De los casos reservados á los prelados *nullius*. . . .	»	846
§. 4.° De los casos reservados á los prelados de regulares. . .	»	847
Sec. III. De la absolucion de casos reservados.	»	849
§. 1.° De la absolucion de casos reservados al Papa. . . .	»	849
§. 2.° De la absolucion de los casos reservados á los obispos.	»	853
§. 3.° De la absolucion de los casos reservados á prelados inferiores. . . .	»	856
CASQUETE.	VIII	5
CASTELLANIA.	»	5
CASTELLANO: CASTELLANA.	»	6
CASTELLANO.	»	6
CASTELLANO.	»	6
CASTIDAD.	»	6
CASTIGO: CASTIGAR. .	»	6
CASTILLA.	»	8
CASTILLAJE: CASTILLERIA.	»	8
CASTILLO.	»	8
CASTILLO.	»	13
CASTRACION: CASTRAR.	»	15
CASTRENSE.	»	38
CASUAL.	»	39
CASUAL: CASUALIDAD. .	»	39
CASUISTA.	»	51
CASULLA.	»	52
CASUS BELLI.	»	52
CASUS FŒDERIS. . . .	»	55
CATACUMBAS.	VIII	53
CATASTRO.	»	55
CATASTRO DE CATALUÑA.	»	56
CATECISMO.	»	56
CATECUMENOS.	»	57
CATEDRA.	»	59
CATEDRAL.	»	61
CATEDRATICO.	»	64
CATEDRATICO (SUBENTENDIENDOSE CENSO, DERECHO).	»	64
CATEGORIA.	»	66
CATEQUESIS (1).	»	65
CATEQUISMO.	»	67
CATEQUISTA.	»	68
CATEQUIZAR.	»	68
CATOLICISMO.	»	68
CATOLICO.	»	68
CATOLICOS.	»	69
CAUCION.	»	69
CAUCION DE CONDUCTA.	»	69
CAUCION DE CUSTODIA.	»	74
CAUCION DAMNI INFECTI (DE DAÑO INMINENTE). . .	»	76
CAUCION DE DOLO. . . .	»	77
CAUCION FRUCTUARIA. .	»	78
CAUCION JUDICATUM SOLVI. (DE PAGAR JUZGADO Y SENTENCIADO). . . .	»	79
CAUCION JUDICATUM SOLVI (PARA LOS ESTRANJEROS).	»	81
CAUCION JUDICIO SISTI (DE PRESENTARSE EN JUICIO Y DE ESTAR A DERECHO).	»	89
CAUCION JURATORIA. .	»	93
CAUCION MUCIANA. . . .	»	94
CAUCION DE NO OFENDER.	»	94
CAUCION DE PERIODICOS.	»	97
CAUCION DE RATO. . .	»	97
CAUCIONERO.	»	99
CAUDAL.	»	99

(1) Por yerro de imprenta, en el *texto* dice CATECUMENSIS

	TOM.	PAG.
CAUDALES (conduccion, custodia, distribucion de).	VIII	100
CAUDALES VENIDOS DE AMERICA.	»	101
CAUDATARIO.	»	102
CAUDILLO.	»	102
CAUSA (en su acepcion filológica general).	»	102
CAUSA (en sentido filosófico general).	»	104
CAUSA (en lo moral y legal).	»	108
CAUSA (por motivo).	»	115
CAUSA (por razon).	»	118
CAUSA DE PEDIR.	»	119
CAUSA (en los testamentos y contratos).	»	119
CAUSA CIVIL DE OBLIGAR.	»	123
CAUSA (en lo procesal).	»	128
CAUSA ONEROSA: CAUSA LUCRATIVA.	»	129
CAUSA FALSA.	»	130
CAUSA JUSTA.	»	131
CAUSA TORPE.	»	131
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Seccion única.	»	132
§. 1.° De la causa torpe por parte solo del que por tal motivo dá ó promete.	»	133
§. 2.° De la causa torpe por parte solo del que en este concepto recibe pago ó promesa.	»	135
§. 3.° De la causa torpe por parte del que dá y del que recibe.	»	136
§. 4.° Algunas cuestiones especiales, y consideraciones comunes á los párrafos anteriores.	»	136
CAUSA PIA.	VIII	142
CAUSA (en materias eclesiásticas).	»	147
CAUSANTE: CAUSA-DANTE: CAUSA-HABIENTE.	»	163
CAUSAR INSTANCIA.	»	163
CAUSIDICO.	»	163
CAUTELA.	»	163
CAUTIVO.	»	164
CAZA Y PESCA.	»	164
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Novísima Recopilacion.	»	164
Disposiciones posteriores.	»	168
Código penal.	»	173
Legislacion estranjera.	»	175
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales sobre la caza y pesca.	»	176
§. 1.° Orígen de la caza y pesca, y del derecho de cazar y pescar.	»	176
§. 2.° Naturaleza del derecho de cazar y pescar, y hechos que constituyen el ejercicio de la caza y pesca.	»	179
§. 3.° Condiciones á que debe estar sujeto el derecho de cazar y pescar.	»	182
Sec. II. Disposiciones del derecho español relativas al ejercicio de la caza.	»	185
§. 1.° De la caza en tierras de propiedad particular.	»	185
§. 2.° De la caza en tierras de propios y baldíos.	»	191

	TOM.	PAG.
§. 3.° De la caza de las palomas.	VIII	196
§. 4.° De la caza de animales dañinos. . .	»	197
SEC. III. Disposiciones del derecho español relativas á la pesca marítima. . . .	»	199
§. 1.° Nociones históricas.	»	200
§. 2.° Facultad de ejercer la pesca marítima.	»	202
§. 3.° Instrumentos ó artes de pescar. . . .	»	204
§. 4.° Parajes y estaciones en que se permite la pesca. . . .	»	212
§. 5.° Pesqueras especiales.	»	213
SEC. IV. De la pesca en los rios, estanques, lagos y otros puntos semejantes, y de las restricciones á que está sujeta. .	»	220
SEC. V. Del procedimiento y de las penas en materia de caza y pesca.	»	225
§. 1.° Del procedimiento. .	»	225
§. 2.° De las penas. . .	»	228
CAZA Y PESCA (EN LO CANONICO).	»	230
CEDULA.	»	232
CEDULA ANTE DIEM. . .	»	233
CEDULA DE ABONO. . .	»	233
CEDULA AUSILIATORIA.	»	233
CEDULA BANCARIA. . .	»	233
CEDULAS DE BANCO. . .	»	233
CEDULA DEL CONSEJO.	»	234
CEDULA DE DILIGENCIAS.	»	234
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO.	»	234
CEDULA DE GRACIA. . .	»	236
CEDULAS HIPOTECARIAS.	»	236
CEDULA DE INDULTO. . .	»	237
CEDULA DE INVENCION.	VIII	237
CEDULA DE INVENCION PARA ULTRAMAR. . .	»	243
CEDULA DE NOTIFICACION.	»	247
CEDULA DE PREEMINENCIAS.	»	249
CEDULA REAL.	»	249
CEDULA DE RETIRO. . .	»	250
CEDULA DE RUEGO Y ENCARGO.	»	250
CEDULA DE SUCESION. .	»	251
CEDULA DE VECINDAD. .	»	251
CEDULA DE VINCULACION.	»	252
CEDULA DE UGIER. . .	»	252
CEDULON.	»	252
CELADOR DE BARRIO. .	»	252
CELADOR DE CAMINOS. .	»	254
CELADOR DE CAMPO. .	»	255
CELADOR DE CARCEL. .	»	256
CELADOR DE MONTES. .	»	256
CELADOR DE POLICIA URBANA.	»	256
CELADOR DE VIGILANCIA NOCTURNA. . . .	»	257
CELADORES REALES. .	»	258
CELIBATO: CELIBE. . .	»	259
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica: consideraciones generales sobre el celibato.	»	260
SEC. II. Del celibato civil. .	»	262
SEC. III. Del celibato sacerdotal y religioso. .	»	267
§. 1.° Consideraciones generales sobre el celibato sacerdotal y religioso. . . .	»	267
§. 2.° Leyes, y decisiones de la Iglesia católica acerca del celibato.	»	268
§. 3.° Disciplina de la Igle-		

	TOM.	PAG.
sia griega sobre el celibato sacerdotal.	VIII	272
§. 4.° Cánones y preceptos de los concilios españoles. . . .	»	275
§. 5.° Disposiciones del derecho civil acerca del celibato eclesiástico. . . .	»	276
§. 6.° La continencia se miró siempre como circunstancia indispensable para ejercer las ceremonias sagradas de todos los cultos religiosos. . . .	»	278
§. 7.° Impugnaciones dirigidas contra el celibato sacerdotal: su solucion. . .	»	280
CELSITUD.	»	289
CEMENTERIO.	»	289
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Indicaciones históricas.	»	290
Sec. II. Consideraciones generales sobre cementerios. . . .	»	292
Sec. III. Prácticas y disposiciones eclesiásticas sobre cementerios.	»	293
Sec IV. Prácticas y disposiciones civiles sobre cementerios. . .	»	296
Sec. V. Administracion y policía de los cementerios.	»	300
CEMENTERIOS DE COMUNIONES NO CATOLICAS.	»	307
CEMENTERIOS (EN ULTRAMAR).	»	310
CENA.	»	311
CENA (BULA DE LA).	VIII	311
CENCERRADA.	»	317
CENIZA.	»	320
CENOBITA.	»	320
CENOTAFIO.	»	320
CENSALES.	»	321
CENSATARIO.	»	322
CENSIDO.	»	437
CENSO.	»	322
CENSO DE AGUA.	»	322
CENSO AL QUITAR. . . .	»	322
CENSO (EN LO CANONICO). .	»	322
CENSO CONSIGNATIVO. .	»	322
CENSO (COMO CONTRATO). .	»	322
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	323
Novísima Recopilacion. . . .	»	325
Disposiciones posteriores. . .	»	332
Recopilacion de Indias. . . .	»	339
Legislacion canónica. . . .	»	343
Legislacion estranjera. . . .	»	346
Proyecto de Código civil. . .	»	346
Ley de 27 de febrero de 1856.	»	349
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica. .	»	332
Sec. II. Clasificacion y naturaleza de los censos.	»	373
§. 1.° Clasificacion de los censos.	»	373
§. 2.° Carácter y naturaleza de los censos. .	»	374
§. 3.° Censo enfitéutico. .	»	378
§. 4.° Censo reservativo. .	»	379
§. 5.° Censo consignativo.	»	379
§. 6.° Censo vitalicio. . .	»	380
Sec. III. Constitucion de los censos.	»	381
§. 1.° Capital ó precio de los censos. . .	»	381
§. 2.° Personas que pueden constituir censos.	»	384
§. 3.° Cosas sobre que pue-		

	TOM.	PAG.
den constituirse los censos.	VIII	384
§. 4.° Rédito, ó pension de los censos. . .	»	386
§. 5.° Fiador del censo. .	»	387
§. 6.° Escritura.	»	388
SEC. IV. Pactos y obligaciones que suelen añadirse al contrato censual. .	»	388
SEC. V. Reconocimiento y reduccion de los censos.	»	390
§. 1.° Reconocimiento de los censos: subrogacion y liberacion de la hipoteca. .	»	390
§. 2.° De la reduccion de los censos. . . .	»	390
SEC. VI. Acciones que nacen de los censos, y naturaleza de su hipoteca. . . .	»	391
§. 1.° Acciones que nacen de los censos. . .	»	391
§. 2.° De la naturaleza de la hipoteca censual.	»	393
SEC. VII. Estincion de los censos.	»	394
§. 1.° Destruccion ó esterilidad superveniente de la hipoteca.	»	393
§. 2.° Dimision de la hipoteca.	»	396
§. 3.° Venta judicial de la hipoteca. . . .	»	397
§. 4.° Del comiso. . . .	»	397
§. 5.° De la consolidacion de dominio. . .	»	398
§. 6.° Redencion. . . .	»	398
§. 7.° Prescripcion. . . .	»	402
§. 8.° Estincion del censo vitalicio. . . .	»	404
SEC. VIII. Del procedimiento.	»	404
CENSO DE AGUA. . . .	»	409
CENSO ELECTORAL. . .	»	409
CENSO ENFITEUTICO, FRUCTUARIO, IRREDIMIBLE Y OTROS. . .	VIII	409
CENSO ESTADISTICO. .	»	409
CENSO FEUDAL.	»	411
CENSO GOTICO.	»	411
CENSO DE POBLACION.	»	411
ESTADO GENERAL de la poblacion de España en el año de 1797.	»	417
CENSO DE POBLACION DE GRANADA.	»	423
CENSO DE RIQUEZA. . .	»	423
CENSO ROMANO.	»	423
CENSO (POR TRIBUTO). . .	»	425
CENSOR.	»	425
CENSOR REGIO.	»	426
CENSOR (LEGISLACION ROMANA).	»	427
CENSOR (EN LAS SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS).	»	429
CENSOR DE TEATROS. .	»	430
CENSORES DE IMPRENTA.	»	434
CENSOS DEL CLERO. .	»	434
CENSOS DEL ESTADO. .	»	454
CENSOS DE NAVARRA. .	»	435
CENSOS EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.	»	436
CENSOS SUELTOS. . . .	»	436
CENSOS EN ULTRAMAR.	»	437
CENSUAL.	»	437
CENSUARIO.	»	437
CENSURA.	»	437
CENSURA ECLESIASTICA DE OBRAS.	»	437
CENSURA DE OBRAS. .	»	437
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Consideraciones generales sobre la censura.	»	437
SEC. II. Reseña histórica: derecho constituido sobre la censura civil.	»	441

	TOM.	PAG.
CENSURA DE OBRAS EN ULTRAMAR.	VIII	448
CENSURA CIENTIFICA DE OBRAS O ESCRITOS.	»	448
CENSURA DE PERIODICOS.	»	449
CENSURA DE PIEZAS DRAMATICAS.	»	449
CENSURA PREVIA.	»	449
CENSURA Y CORRECCION (TRIBUNAL DE).	»	449
CENSURAS ECLESIASTICAS.	»	449
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Orígen, fundamento, naturaleza y clasificacion de las censuras.	»	451
§. 1.° Orígen de las censuras eclesiásticas.	»	451
§. 2.° Fundamento de las censuras eclesiásticas.	»	453
§. 3.° Naturaleza de las censuras.	»	454
§. 4.° Clasificacion de las censuras.	»	455
SEC. II. Autoridades que pueden imponer censuras: sugeto de ellas: motivo.	»	458
SEC. III. Solemnidades de las censuras: efectos.	»	468
SEC. IV. Remedios contra las censuras: ineficacia á veces de las mismas: absolucion: reserva de absolucion.	»	475
§. 1.° Apelacion y otros medios de invalidar, ó dejar sin efecto las censuras.	»	475
§. 2.° Absolucion.	»	477
§. 3.° Reserva de absolucion.	VIII	479
SEC. V. Parsimonia en el uso de censuras: intervencion del poder temporal sobre la materia.	»	485
CENSURAS ECLESIASTICAS (EN ULTRAMAR).	»	486
CENTEN.	»	487
CENTENA.	»	487
CENTESIMA.	»	487
CENTIAREA.	»	487
CENTIGRAMO.	»	488
CENTILITRO.	»	488
CENTIMETRO.	»	488
CENTIMO.	»	489
CENTINELA.	»	489
CENTRAL.	»	495
CENTRALIDAD.	»	495
CENTRALIZACION.	»	495
CENTRALIZACION.	»	502
CENTRALIZACION DE FONDOS.	»	502
CENTUMVIROS.	»	505
CENTURIA.	»	506
CENTURIA.	»	506
CENTURIONES.	»	506
CEPO.	»	506
CEPO: CEPILLO.	»	507
CERA.	»	507
CERCA: CERCADO.	»	511
CERCAR.	»	511
CERCO.	»	511
CEREALES.	»	508
CEREMONIA.	»	508
CEREMONIAS (MAESTRO DE).	»	511
CEREMONIAL.	»	511
CERIBONES.	»	511
CEROFERARIO.	»	511
CERRAR: CERRAMIENTO.	»	511
CERTEZA.	»	512
CERTEZA LEGAL.	»	516
CERTEZA RELIGIOSA.	»	516
CERTIDUMBRE.	»	516

	TOM.	PAG.
CERTIFICACION: CERTIFICADO	VIII	518
CERTIFICACION (DE CONTENTA)	»	521
CERTIFICACION DE CREDITO	»	521
CERTIFICADO	»	521
CERTIFICAR	»	524
CERVEZA	»	525
CESACION (A DIVINIS)	»	525
CESACION DE EMPLEADOS	»	529
CESANTES	»	530
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes y disposiciones sobre cesantes	»	531
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De la clase de cesantes en general	»	546
§. 1.° Acepcion propia de la denominacion oficial y técnica de cesantes	»	546
§. 2.° Orígen de la clase de cesantes	»	548
§. 3.° Consideraciones generales sobre la clase de cesantes	»	549
SEC. II. Vicisitudes legislativas de la clase de cesantes	»	550
SEC. III. Clasificacion y sueldo de los cesantes	»	550
§. 1.° Autoridades á las cuales ha competido y compete la clasificacion de los cesantes	»	550
§. 2.° Computacion y abono de años de servicio	»	552
§. 3.° Pension	»	554
SEC. IV. Descuentos	»	554
SEC. V. Diferentes órdenes sobre colocacion de cesantes	VIII	556
SEC. VI. Causas porque se pierde el derecho á cesantía	»	557
SEC. VII. De los cesantes de destinos de Ultramar	»	557
APÉNDICE	»	559
CESANTIA	»	561
CESANTIA DE LOS MINISTROS	»	566
CÉSAR	»	570
CESE	»	571
CESION	»	571
CESION DE ACCIONES	»	572
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Observaciones generales sobre el orígen y fundamento de la cesion de acciones	»	572
SEC. II. De la cesion de acciones en general	»	575
SEC. III. De la cesion convencional de acciones	»	576
SEC. IV. De la cesion legal y necesaria, y del beneficio de cesion de acciones	»	582
§. 1.° De la cesion de acciones meramente legal	»	582
§. 2.° De la cesion necesaria, y del beneficio de cesion de acciones	»	585
SEC. V. De la cesion de derechos litigiosos	»	589
CESION DE ACCIONES DE BANCO: DE MINAS: DE SOCIEDAD, etc.	»	593
CESION DE ARRIENDO	»	594
CESION DE BIENES	»	594

TOM. PÁG.

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Observaciones generales sobre el orígen y naturaleza de la cesion de bienes. . . . VIII 594

Sec. II. De la cesion judicial de bienes: personas que no pueden gozar de este beneficio: sus requisitos, y efectos. . . . . » 596

§. 1.° De las personas que no pueden gozar del beneficio de la cesion de bienes. . . . . » 596

§. 2.° De los requisitos para la cesion judicial de bienes. . . . » 598

§. 3.° De los efectos de la cesion judicial de bienes. . . . . » 601

Sec. III. De la cesion de bienes estrajudicial ó convencional. . » 603

Apéndice á las dos secciones anteriores. . . . . » 604

Sec. IV. De la cesion de bienes en materias de comercio. . . » 605

CESION (EN MATERIA BENEFICIAL). . . . . » 607

CESIONARIO. . . . . » 608

CETRERIA. . . . . » 609

CETRO. . . . . » 609

CICLO. . . . . » 610

CIEGO. . . . . » 612

CIENCIA. . . . . » 616

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Indagaciones generales acerca de la ciencia en lo filosófico. . . . VIII 617

Sec. II. De la ciencia en el órden civil. . . » 619

§. 1.° De la ciencia en lo político. . . . . » 619

§. 2.° De la ciencia en lo administrativo. . » 620

§. 3.° De la ciencia en lo jurídico civil. . » 621

Sec. III. De la ciencia en lo canónico. . . » 621

CIENTOS Y CUATROS UNOS. . . . . » 628

CIERTO. . . . . » 628

CIFRA. . . . . » 629

CILLA. . . . . » 633

CILLERERO. . . . . » 633

CIMARRON. . . . . » 633

CINCO GREMIOS. . . . » 639

CINCUESMA. . . . . » 639

CINGULO. . . . . » 639

CIRCADA. . . . . » 639

CIRCUNCISION. . . . . » 639

CIRCUNSCRIPCION. . . » 639

CIRCUNSTANCIAS. . . . » 639

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. Indicaciones filosóficas sobre circunstancias. . . . . » 640

Sec. II. Reseña histórica, y derecho comparado sobre apreciacion de las circunstancias en lo moral y legal. . » 646

Sec. III. De las circunstancias en lo civil y político. . . . . » 650

Sec. IV. De las circunstancias en lo criminal. . . . . » 651

§. 1.° De las circunstancias eximentes. . . » 652

TOM. PAG.

§. 2.° De las circunstancias atenuantes. . . VIII 653
§. 3.° De las circunstancias agravantes. . . » 654
§. 4.° Consideraciones comunes á los tres párrafos anteriores.. . . . . » 635
Sec. V. Reglas para la aplicacion de la teoría jurídica de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes; observaciones sobre las mismas. . » 663
CIRIO. . . . . » 669
CIRUJANO.. . . . . » 670
PARTE DOCTRINAL.
Sumario.
Sec. I. Indicaciones generales sobre la cirujía: reseña histórica. » 670
§. 1.° Indicaciones generales sobre la cirujía. . . . . » 670
§. 2.° Legislacion relativa á la enseñanza de la profesion de cirujía. . . . . » 671
Sec. II. Diversas clases de cirujanos. . . » 675
Sec. III. Deberes y prerogativas de los cirujanos. . . . . » 680
CIRUJANOS DE LA ARMADA.. . . . . » 686
CIRUJANOS DE EJÉRCITO. . . . . » 687
CIRUJANOS TITULARES. . » 687
CIRUJANOS (EN ULTRAMAR). » 687
CIRUJIA. . . . . » 687
CISMA. . . . . » 688
PARTE DOCTRINAL.
Sumario.
Sec. I. Naturaleza y clasificacion del cisma. . » 690
Sec. II. Reseña histórica de los principales cismas.. . . . » 695
§. 1.° Cismas anteriores al gran cisma de Oriente. . . . » 695
§. 2.° Gran cisma de Oriente.. . . . . » 697
§. 3.° Cismas posteriores al de Oriente. . . » 702
Sec III. Consideraciones generales sobre el orígen y consecuencia de los cismas: regla práctica de conducta en tiempo de cisma. . . . . » 713
Sec. IV. Efectos canónicos de los cismas: absolucion: reconciliacion: efectos canónicos de esta y aquella. . . » 716
Sec. V. Penalidad contra los cismáticos. . . » 718
§. 1.° Disposiciones penales del poder eclesiástico. . . » 718
§. 2.° Disposiciones penales del poder temporal.. . . . » 720
CITA.. . . . . » 721
PARTE DOCTRINAL.
Sumario.
Sec. I. De las citas en lo judicial. . . . » 723
§. 1.° De las citas por parte del juez. . . . » 723
§. 2.° De las citas por parte del actuario.. . » 725
§. 3.° De las citas por parte del encartado y testigos. . . » 725
§. 4.° De las citas de leyes

	TOM.	PAG.
y autoridades por el juez ó las partes.	VIII	727
SEC. II. De las citas personales en lo político, administrativo y disciplinario. . .	»	728
SEC. III. De las citas de leyes, cánones y cuerpos jurídicos. . . .	»	729
SEC. IV. De las citas en lo literario. . . .	»	732
CITACION.	»	733
CITACION ANTE-DIEM. .	»	740
CITACION A DOMICILIO.	»	741
CITACION (EN LO ECLESIASTICO).	»	742
CITACION DE EVICCION.	»	744
CITACION POR EDICTOS, PREGONES Y BANDOS.	»	744
CITACION POR PLEITO RETARDADO.	»	745
CITACION DE REMATE. .	»	745
CITAR.	»	745
CIUDAD.	»	745
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Orígen filosófico, histórico, y filológico de la enunciativa y entidad política *ciudad*. . .	»	747
SEC. II. Continuacion del mismo asunto: acepciones diversas de la enunciativa *ciudad*. . . .	»	750
SEC. III. De las ciudades romanas. . . .	»	753
§. 1.° De las ciudades durante la república romana. . .	»	753
§. 2.° De las ciudades durante el imperio.	»	756
SEC. IV. De las ciudades segun el derecho é historia de España.	VIII	760
§. 1.° De las ciudades durante la dinastía goda. . . .	»	760
§. 2.° De las ciudades durante la restauracion.	»	762
§. 3.° De las ciudades despues del reinado de los Reyes Católicos. . . .	»	764
SEC. V. De las ciudades en el siglo XIX: correlacion entre ciudades, villas y lugares. . . .	»	764
CIUDADANO.	»	770
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SECCION ÚNICA.—De la cualidad y derechos del ciudadano. . . .	»	771
§. 1.° Indicaciones generales y filológicas.	»	771
§. 2.° Ciudadano romano.	»	774
§. 3.° Ciudadano español. .	»	777
§. 4.° Ciudadano en la antigua corona de Aragon. . . .	»	780
CIUDADES EPISCOPALES.	»	783
CIUDADES HANSEATICAS.	»	787
CIUDADES DE VOTO EN CORTES.	»	790
CIUDADELA.	IX	5
CIVERA.	»	5
CIVICO.	»	5
CIVIL.	»	5
CIVIL: CIVILISIMO. . .	»	7
CIVIL (GUARDIA).	»	7
CIVILIZACION: CIVILIZADO: CIVILIZADOR: CIVILIZAR.	»	

	TOM.	PAG.
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Indagaciones filológicas y generales sobre la civilizacion.	IX	8
Sec. II. De la civilizacion antigua, anterior al cristianismo. .	»	17
Sec. III. De la civilizacion despues de la aparicion del cristianismo.. . . .	»	21
Sec. IV. De la civilizacion española. . . .	»	26
Sec. V. Juicio retrospectivo: deducciones generales. . . .	»	32
CIVILMENTE.	»	36
CLAMOR.	»	36
CLANDESTINO.	»	36
CLASE.	»	36
CLASES PASIVAS. . . .	»	36
CLASES PASIVAS (JUNTA DE)..	»	40
PARTE LEGISLATIVA.		
Disposiciones posteriores á la Novísima Recopilacion.. .	»	40
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Origen y vicisitudes de las autoridades y juntas clasificadoras de derechos pasivos de empleos, anteriores á la junta actual.	»	59
Sec. II. De la junta actual de clases pasivas .	»	61
Sec. III. Clasificacion de empleados de Ultramar.	»	63
CLAUSTRA.	»	66
CLAUSTRAL.	»	66
CLAUSTRO.	»	66
CLAUSTRO (EN LO ACADEMICO).	IX	66
CLAUSTRO (EN LO MONASTICO Y RELIGIOSO).	»	70
CLAUSULA.	»	72
CLAUSULA (EN LOS CONTRATOS Y TESTAMENTOS). . .	»	72
CLAUSULA DE ADICION IN DIEM.	»	78
CLAUSULA CODICILAR. .	»	78
CLAUSULA DE CONSTITUTO.	»	80
CLAUSULA DEROGATORIA.	»	83
CLAUSULA DEROGATORIA (EN LOS TESTAMENTOS).	»	83
CLAUSULA DE EVICCION.	»	87
CLAUSULA DE EXCEPTIS CLERICIS.	»	88
CLAUSULA GUARENTIGIA.	»	92
CLAUSULA IRRITANTE. .	»	94
CLAUSULA JURATORIA. .	»	94
CLAUSULA DE LA LEY COMISORIA.	»	96
CLAUSULA DE NON ALIENANDO.	»	96
CLAUSULA PENAL. . . .	»	96
CLAUSULA DE PRECARIO.	»	98
CLAUSULA RESOLUTORIA.	»	98
CLAUSULA DE RETROVENTA.	»	99
CLAUSULA (EN LO CANÓNICO).	»	99
CLAUSURA.	»	100
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Clausura de los monasterios y conventos de varones.	»	102
§. 1.° Derecho antiguo sobre clausura en las comunidades de varones. . .	»	132
§. 2.° Derecho actual sobre		

	TOM.	PAG.
clausura en las comunidades de varones. . . .	IX	140
§. 3.° Disciplina particular de España é Indias sobre clausura en las comunidades de varones.	»	111
Sec. II. Clausura de los monasterios y conventos de mujeres.	»	115
§. 1.° Derecho antiguo sobre la clausura en las comunidades de mujeres.	»	115
§. 2.° Derecho actual sobre clausura en las comunidades de mujeres. . . .	»	118
§. 3.° Disciplina particular de España é Indias sobre clausura en las comunidades de mujeres. . . .	»	131
CLAVE.	»	135
CLEMENCIA.	»	136
CLEMENTINAS	»	136
CLERECIA.	»	136
CLERICAL.	»	136
CLERICATO	»	136
CLERIGO.	»	136

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

Sec. I. De las clases comprendidas bajo la denominacion *clérigos*: requisitos y circunstancias del clericato. . . .	»	138
Sec. II. Obligaciones inherentes al estado clerical.	IX	143
§. 1.° Obligaciones positivas por derecho eclesiástico. . .	»	144
§. 2.° Obligaciones positivas por derecho civil.	»	147
§. 3.° Obligaciones negativas por derecho eclesiástico. . .	»	149
§. 4.° Obligaciones negativas por derecho civil.		153
Sec. III. Inmunidades y franquicias de los clérigos.	»	157
§. 1.° Inmunidades y franquicias que traen su orígen del derecho eclesiástico.	»	157
§. 2.° Inmunidades y franquicias que traen su orígen del derecho civil. . .	»	162
Sec. IV. Causas por que se pierden las inmunidades y franquicias de los clérigos.	»	167
CLERO.	»	170
CLERO (CONSTITUCION CIVIL DEL)	»	175
CLERO (DOTACION DEL CULTO Y CLERO).	»	193
CLERO FRANCES: CLERO GALICANO (LIBERTADES DEL).	»	193
CLIENTE.	»	193
CLIENTELA.	»	194
CLINICA.	»	194
CLINICOS.	»	194
CLOACA.	»	195
CLUB.	»	196
COACCION. . . .	»	197
COADJUTOR.	»	198
COADJUTOR, COADJUTORIA (EN LO CANÓNICO). . .	»	198

	TOM.	PAG.
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	IX	200
SEC. II. Orígen y fundamento de las coadjutorías..	»	204
SEC. III. Diversas clases de coadjutorías. . .	»	203
SEC. IV. Correlacion entre las coadjutorías, jubilaciones y espectativas. . .	»	206
SEC. V. A quiénes se dan coadjutores. . .	»	207
SEC. VI. Causas legítimas para dar coadjutor.	»	208
SEC. VII. Autoridad competente para dar coadjutor. . . .	»	211
SEC. VIII. Modo y forma de darse las coadjutorías.	»	211
SEC. IX. De los coadjutores..	»	214
§. 1.° Cualidades que deben concurrir en los coadjutores. .	»	214
§. 2.° Jurisdiccion y atribuciones de los coadjutores. . .	»	214
§. 3.° Derechos, honores y prerogativas del coadjutor. . .	»	215
§. 4.° Obligaciones de los coadjutores. . .	»	216
§. 5.° Cóngrua y emolumentos.	»	217
§. 6.° De la cesacion en el cargo de coadjutor.	»	218
SEC. X. De las coadjutorías, segun la disciplina de la iglesia española.. . .	»	219
COADJUTOR (EN LO CIVIL).	»	227
COADJUTORES.	»	228
COADYUVANTE.	»	228
COALICION.	IX	228
COARTADA.	»	229
COARTADOS.	»	229
COARTAR.	»	230
COBARDE.	»	230
COBARDIA.	»	230
COBRADOR.	»	232
COBRANZA.	»	232
COBRATORIO.	»	232
COCHERA. . . : . . .	»	233
COCHEROS.	»	234
COCHES.	»	234
COCHES DE CASA REAL.	»	240
COCHES DE ALQUILER, DE RUA. , ...	»	242
CODICE.	»	242
CODICIA.	»	247
CODICILAR.	»	248
CODICILO.	»	248
CODIFICACION. . . .	»	251
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De la codificacion en general: cuestiones suscitadas por la escuela histórica.	»	252
SEC. II. De la codificacion en materia penal, mercantil, y de procedimientos. .	»	256
SEC. III. Del órden con que debe procederse en la formacion de los diferentes códigos. . . .	»	260
SEC. IV. De la codificacion en su aplicacion á España. . . .	»	263
SEC. V. De los diferentes trabajos hechos en España para la codificacion general.	»	265
SEC. VI. De la discusion de los códigos en las		

	TOM.	PAG.
naciones regidas por gobiernos representativos. .	IX	272
CODIGO.	»	273
CODIGO GREGORIANO. . .	»	274
CODIGO HERMOGENIANO.	»	278
CODIGO TEODOSIANO. . .	»	281
CODIGO JUSTINIANEO ANTIGUO.	»	287
CODIGO REPETITÆ PRÆLECTIONIS.	»	288
CODIGO DE EURICO. . . .	»	293
CODIGO DE ALARICO. . .	»	296
CODIGO CIVIL.	»	297
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De los diferentes trabajos hechos en España para la formacion del Código civil.. . .	»	299
SEC. II. Proyecto del Código civil.	»	302
CODIGO DE COMERCIO..	»	304
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De los códigos de comercio en general, dentro y fuera de España. .	»	304
SEC. II. Del Código de comercio vigente. .	»	312
SEC. III. De la reforma del Código de comercio. . . .	»	315
CODIGO PENAL.	»	318
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De las causas que hicieron necesaria en España la formacion del Código penal. . .	»	319
SEC. II. De los diferentes trabajos emprendidos ó concluidos, hasta que en 1830 se reformó el Código penal de 1848. .	IX	322
SEC. III. Juicio crítico del Código penal. . .	»	327
CODIGO RURAL.	»	332
CODIGOS ROMANOS. . .	»	334
CODIGOS ESPAÑOLES. .	»	335
CODIGOS DE ULTRAMAR.	»	342
CODIGOS ESTRANGEROS.	»	347
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Desarrollo general de la codificacion en las naciones modernas, . . .	»	348
§. 1.° De la codificacion penal.	»	349
§. 2.° De la codificacion civil.	»	351
§. 3.° De la codificacion mercantil.. . .	»	353
SEC. II. Desarrollo de la codificacion particular en cada Estado.	»	354
Alemania..	»	355
Altemburgo.	»	356
América del sur. . . .	»	356
Appenzell.	»	357
Argelia.	»	357
Argovia.	»	357
Australia.	»	357
Austria.	»	357
Baden.	»	359
Basiléa.	»	360
Baviera.	»	360
Bélgica.	»	362
Berg (*Ducado de*). . . .	»	363
Berna.	»	363

	TOM.	PAG.
Bolivia	IX	364
Brasil	»	365
Brunswick	»	365
Buenos-Aires	»	365
Canadá	»	365
Cerdeña	»	365
Ceylan	»	367
Chile	»	367
China	»	367
Dinamarca	»	370
Dos Sicilias	»	371
Ecuador	»	371
Eichsfeld (*Principado de*)	»	371
Erfurth (*Principado de*)	»	371
Escocia	»	371
Estados Romanos	»	371
Estados-Unidos de América	»	372
Etruria (*Reino de*)	»	373
Finlandia	»	373
Francfort	»	373
Francia	»	374
Friburgo	»	382
Galitzia occidental	»	383
Génova (*Ducado de*)	»	383
Ginebra	»	385
Glaris	»	384
Goatemala	»	384
Gran Bretaña	»	384
Grecia	»	384
Grisones	»	386
Guadalupe	»	386
Guastala	»	386
Guernesey (*Isla de*)	»	386
Guyana	»	386
Haiti	»	386
Hanover	»	386
Hesse-Darmstadt	»	388
Holanda	»	389
Holstein (*Ducado de*)	»	392
Hungría	»	392
Inglaterra	»	392
Irlanda	»	394
Islas Jónicas	»	394
Jersey (*Isla de*)	»	393
Lippe-Detmold (*Principado de*)	»	393
Lithuania	»	393
Lombardo-Veneto (*Reino*)	IX	393
Lubeck	»	393
Luca	»	393
Lucerna	»	395
Luisiana	»	396
Luxemburgo	»	397
Malta	»	397
Man (*Isla de*)	»	397
Martinica	»	397
Massachussets	»	397
Méjico	»	397
Meiningen	»	398
Módena	»	398
Moldavia	»	399
Muhlhausen (*Principado de*)	»	399
Munster	»	399
Nápoles	»	399
Nassau	»	399
Neerlanda	»	399
Neuchatel	»	399
Nordhausen (*Principado de*)	»	399
Noruega	»	399
Nueva Granada	»	401
Nueva Jersey	»	401
Nuevo Brunswick	»	401
Oldemburgo	»	401
Paderborn (*Principado de*)	»	401
Paises Bajos	»	401
Parma	»	401
Perú	»	402
Plasencia	»	402
Polonia	»	402
Pomerania	»	404
Portugal	»	404
Posen (*Ducado de*)	»	404
Prusia	»	404
Rusia	»	407
Sajonia	»	409
Sajonia-Altemburgo	»	411
Sajonia-Meiningen	»	411
Sajonia-Weimar	»	411
San-Galo	»	411
Schleswig (*Ducado de*)	»	411
Schwarzburgo-Sondershausen (*Principado de*)	»	411
Senegal	»	411
Servia	»	411

	TOM.	PÁG.
Sicilia.	IX	412
Solera.	»	412
Suécia.	»	412
Terranova.	»	414
Tesino.	»	414
Thurgovia.	»	414
Thuringia.	»	415
Toscana.	»	415
Turquía.	»	416
Valais.	»	417
Valaquia.	»	417
Varsovia.	»	417
Vaud.	»	417
Venezuela.	»	419
Weimar.	»	419
Wurtemberg.	»	420
Zurich.	»	421
Sec. III. Consideraciones generales.	»	422
CODO.	»	424
COEMPCION.	»	428
COERCION.	»	429
COERCITIVO.	»	429
CO-FIADORES, O CONFIADORES.	»	429
COFRADIAS.	»	430
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . .	»	431
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	431
Disposiciones posteriores. .	»	433
Código penal.	»	435
Leyes de Indias.	»	438
Disposiciones canónicas. . .	»	439
Legislacion estranjera. . .	»	443
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales.	»	445
Sec. II. Reseña histórica. .	»	444
Sec. III. Diversas clases de cofradías.	»	447
Sec. IV. De la ereccion de cofradías en España: real licencia. . .	IX	448
Sec. V. Licencia y deberes del Ordinario en punto á cofradías. . .	»	453
Sec. VI. Del número, correlacion y precedencia de las cofradías. .	»	455
Sec. VII. De las cofradías en Ultramar. . .	»	459
Sec. VIII. Derechos del diocesano en lo relativo á cofradías. . .	»	460
Sec. IX. Derechos del párroco en lo relativo á cofradías. . . .	»	465
COGNACION.	»	470
COGNADOS	»	470
COHABITACION.	»	471
COHECHO.	»	471
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes del Fuero Juzgo. . .	»	472
Leyes de las Partidas. . . .	»	472
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	474
Disposiciones posteriores. .	»	476
Código penal.	»	476
Leyes de la Recopilacion de Indias.	»	477
Legislacion canónica. . . .	»	479
Legislacion estranjera. . .	»	479
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones filológicas, é histórico-jurídicas sobre el cohecho, hasta la promulgacion del Código penal vigente.	»	482
Sec. II. Acepcion jurídica, naturaleza y circunstancias del cohecho, segun el Código penal vigente.	»	492
§. 1.° Acepcion jurídica del		

	TOM.	PÁG.
cohecho, segun el Código penal vigente.	IX	493
§ 2.° Naturaleza del cohecho, segun el Código penal. . .	»	494
§. 3.° Diversas clases de cohecho. . . .	»	494
§. 4.° Personas y clases que pueden cometer cohecho, segun el Código penal. .	»	495
§. 5.° De los cómplices en el cohecho. . .	»	496
Sec. III. Trascendencia y criminalidad del cohecho.	»	496
Sec. IV. Penalidad del cohecho.	»	499
§. 1.° Penalidad del cohecho, antes del Código penal.	»	499
§. 2.° Penalidad del cohecho, segun el Código penal.	»	503
Sec. V. Algunas cuestiones prácticas. . . .	»	506
Sec. VI. Del cohecho en elecciones políticas. .	»	520
Sec. VII. Del cohecho en Ultramar. . . .	»	520
COHEREDERO.	»	522
COJEDORES.	»	522
COJIN.	»	522
COLACION.	»	523
COLACION (*por cotejo*). . . .	»	523
COLACION (*por oracion*). . .	»	523
COLACION (EN EL AYUNO). .	»	524
COLACION DE BENEFICIOS.	»	527
COLACION DE BIENES. .	»	531
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas. . . .	»	531
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	532
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica de la colacion de bienes.	IX	535
Sec. II. Del carácter de la colacion en el derecho español. . . .	»	535
Sec. III. De las personas que pueden pedir, y de las que deben hacer la colacion de bienes.	»	538
Sec IV. De lo que debe traerse á colacion. . .	»	542
Sec. V. Del modo de hacer la colacion de bienes.	»	546
COLACION DE GRADOS ACADÉMICOS.	»	547
COLACION DE ORDEN. .	»	547
COLACION SACRAMENTAL.	»	547
COLACIONABLE.	»	547
COLACIONABLE (EN LO CANÓNICO).	»	548
COLACIONAR.	»	548
COLADA.	»	548
COLADOR.	»	549
COLAR.	»	552
COLATARIO.	»	552
COLATERALES.	»	552
COLATIVA: COLATIVO. .	»	553
COLECCION.	»	555
COLECCION DE REALES DECRETOS.	»	555
COLECCION LEGISLATIVA DE ESPAÑA. . . .	»	557
COLECCION DE LEYES Y DECRETOS DE LAS CORTES.	»	562
COLECCIONES LEGISLATIVAS.	»	562
COLECCIONES DE CÁNONES.	»	563
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones gene-		

	TOM.	PÁG.
rales sobre las colecciones de cánones.	IX	564
SEC. II. Colecciones de cánones de la Iglesia de Oriente. . . .	»	567
§. 1.° Coleccion 1.ª de la Iglesia de Oriente, ó *Séries canonum.*	»	567
§. 2.° Coleccion 2.ª. . .	»	568
§. 3.° Coleccion 3.ª, ó de Juan el Escolástico.	»	568
§. 4.° Coleccion 4.ª, á consecuencia del Concilio *in Trullo.* .	»	569
§. 5.° Coleccion 5.ª, ó de Focio.	»	570
SEC. III. Colecciones de la Iglesia de Occidente.	»	570
§. 1.° Coleccion romana, llamada *Prisca.* . .	»	570
§. 2.° Coleccion africana. .	»	572
§. 3.° Coleccion de Dionisio.	»	575
§. 4.° Cánones de los Apóstoles.	»	577
Cánones de Sardis. .	»	580
§. 5.° Coleccion Bracarense.	»	582
§. 6.° Coleccion hispalense, dicha tambien por otros Isidorense, y de cánones de la Iglesia de España.	»	583
§. 7.° Coleccion y capítulos de Adriano. . .	»	588
§. 8.° Coleccion galicana, ó Capitulares de los Reyes francos. .	»	589
§. 9.° Coleccion de Isidoro Mercator. . . .	»	590
§. 10. Coleccion de Reginon.	»	598
§. 11. Coleccion de Burchard, Obispo de Worms. . . .	»	599
§. 12. Coleccion de Ibo, ó de Ibón.	»	600
SEC. IV. Reflexiones sobre la autoridad y observancia de cada una de estas colecciones, hasta la formacion y publicacion del cuerpo general del derecho canónico. . . .	IX	602
COLECTA.	»	604
COLECTA.	»	604
COLECTA.	»	604
COLECTA (EN LO ECLESIASTICO).	»	605
COLECTIVAMENTE: COLECTIVO.	»	609
COLECTOR.	»	609
COLECTOR APOSTOLICO.	»	609
COLECTOR DE DIEZMOS.	»	609
COLECTOR GENERAL DE ESPOLIOS Y VACANTES.	»	609
COLECTOR DE LIMOSNAS.	»	609
COLECTOR PARROQUIAL DE MISAS.	»	609

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Indicaciones generales sobre las colecturías de misas. .	»	610
SEC. II. De los colectores parroquiales de misas.	»	612
§. 1.° Nombramiento de colector.	»	612
§. 2.° Ingresos en colecturía: derechos del colector.	»	612
§. 3.° Deberes del colector en cuanto á la especie de las limosnas.	»	614
§. 4.° Deberes del colector en cuanto á la distribucion y cumplimiento de misas.	»	614
§. 5.° Asistencia diaria del colector á la iglesia.	»	616

	TOM.	PÁG.
§. 6.° Custodia de fondos y documentos. . .	IX	616
§. 7.° Libros de cuenta y razon.	»	616
§. 8.° Rendicion de cuentas,	»	617
COLECTOR GENERAL DE MISAS.	»	618
COLECTOR DE MISAS EN ULTRAMAR.	»	618
COLECTURIA.	»	619
COLEGA.	»	619
COLEGATARIO.	»	619
COLEGIAL.	»	619
COLEGIADO.	»	619
COLEGIATA.	»	619
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Clases y organizacion de las colegiatas. .	»	620
SEC. II. Requisitos para la ereccion canónica de las colegiatas.	»	621
SEC. III. Modos de probarse la cualidad de Colegiata de una iglesia.	»	623
SEC. IV. De las iglesias colegiatas con relacion á otras corporativas.	»	624
SEC. V. Prelacion de las colegiatas entre sí, y respecto de otras iglesias superiores é inferiores. . .	»	624
SEC. VI. Derechos y prerogativas de las colegiatas.	»	625
SEC. VII. De las colegiatas, bajo el punto de vista de su necesidad ó utilidad en la actual disciplina. .	»	626
SEC. VIII. Estado de las colegiatas en la iglesia de España con anterioridad al Concordato de 1851, y disciplina establecida en el particular por el mismo, y recientes disposiciones. . . .	IX	627
COLEGIO.	»	638
COLEGIO DE ABOGADOS.	»	639
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones posteriores á la Novísima Recopilacion.	»	639
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Conveniencia de los colegios de abogados.	»	649
SEC. II. Reseña histórica de los colegios de abogados.	»	652
SEC. III. Estado actual de los colegios de abogados.	»	660
§. 1.° Puntos en que debe haber colegios de abogados. . . .	»	660
§. 2.° Organizacion de los colegios. . . .	»	660
§. 3.° Inscripcion de los abogados en la matrícula. . . .	»	661
§. 4.° Admision de los abogados en los colegios.	»	662
§. 5.° Autoridad disciplinaria.	»	664
§. 6.° Juntas generales. .	»	664
§. 7.° Juntas de gobierno.	»	666
§. 8.° Dependencia de los colegios. . . .	»	669
§. 9.° Fondos y gastos de los colegios. . . .	»	670
§. 10. Montes pios . . .	»	671

	TOM.	PÁG.
§. 11. Asistencia de los colegios á las aperturas de los tribunales.	IX	672
§. 12. Hermandad entre los colegios. . . .	»	673
COLEGIO DE AGENTES DE CAMBIO.	»	674
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. . .	»	674
SEC. II. Actualidad del colegio de agentes de cambio, y de su junta sindical. . . .	»	675
COLEGIO DE AGENTES DE NEGOCIOS.	»	679
COLEGIO DE BOLONIA. . .	»	682
COLEGIO DE CARDENALES.	»	684
COLEGIO DE CIEGOS. . .	»	691
COLEGIO CIENTIFICO. . .	»	691
COLEGIO DE CORREDORES.	»	692
COLEGIO ECLESIASTICO.	»	692
COLEGIO ELECTORAL. . .	»	693
COLEGIO IMPERIAL. . . .	»	693
COLEGIO DE LORETO. . .	»	693
COLEGIO DE MARINA. . .	»	694
COLEGIO MAYOR.	»	694
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Primera época de los colegios mayores,.	»	694
SEC. II. Segunda época. . .	»	697
SEC. III. Tercera época. . .	»	698
SEC. IV. Cuarta época. . .	»	699
SEC. V. Época quinta. . .	»	703
COLEGIO MENOR.	»	708
COLEGIO NAVAL.	»	708
COLEGIO DE HUERFANAS DE PATRIOTAS. . .	»	708
COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y DE CIEGOS. . .	»	711
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Consideraciones generales, y reseña histórica.	IX	712
§. 1.° Orígen y vicisitudes del Colegio en cuanto á la enseñanza de los sordo-mudos.	»	714
§. 2.° De la creacion de la escuela de ciegos, y su agregacion al Colegio de sordo-mudos.	»	715
SEC. II. Medidas adoptadas por el Gobierno para fomentar la enseñanza de los sordo-mudos y de los ciegos. . . .	»	716
SEC. III. De la organizacion actual del Colegio de sordo-mudos y de ciegos. . . .	»	720
§. 1.° De los alumnos. . .	»	721
§. 2.° Instruccion que reciben los sordo-mudos.	»	722
§. 3.° Instruccion que reciben los ciegos. .	»	723
COLEGIOS MILITARES. .	»	724
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Enseñanza de artillería.	»	724
SEC. II. Enseñanza de ingenieros.	»	733
SEC. III. Enseñanza de caballería.	»	739
SEC. IV. Enseñanza de infantería.	»	745
SEC. V. Enseñanza de marina.	»	746
SEC. VI. Colegios generales, ó enseñanza de todas		

	TOM.	PÁG.
armas.	IX	755
SEC. VII. Enseñanza particular de cadetes de regimiento. . .	»	757
SEC. VIII. Enseñanza de estado mayor del ejército.	»	760
COLEGIOS DE MISIONES.	»	767
COLEGIOS DE NOTARIOS.	»	770
COLEGIOS DE LAS ORDENES MILITARES, O DE FREILES.	»	770
COLEGIOS DE ORDENES RELIGIOSAS.	»	771
COLEGIOS POLITÉCNICOS.	»	771
COLEGIOS PRIVADOS. .	»	771
COLEGIOS DE PROCURADORES.	»	779
COLEGIOS DE PROVINCIA.	»	779
COLEGIOS PUBLICOS. .	»	780
COLEGIOS REALES. . .	»	780
COLEGIOS ROMANOS. .	»	780
COLEGIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	»	780
COLEGIOS SINGULARES O ESPECIALES. . . .	»	780
COLEGISLADOR.	X	5
COLITIGANTE.	»	5
COLONIA.	»	5

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. De las colonias en general.	»	7
SEC. II. Diversas clases de colonias.	»	9
SEC. III. Colonias antiguas. .	»	14
SEC. IV. Colonias modernas. .	»	15
SEC. V. Colonias españolas posteriores al descubrimiento de América.	»	20
§. 1.° Colonias de Ultramar.	»	20
§. 2.° Colonias peninsulares.	»	25
COLONIA (*por arrendamiento de tierras*).	»	27
COLONIZAR.	X	29
COLONO.	»	30
COLORADO.	»	30
COLISION.	»	30
COLUSION.	»	30
COLUSION (EN LO CANÓNICO).	»	31
COLLACION.	»	35
COLLAR.	»	53
COLLAR (GRAN COLLAR DE LA MAGISTRATURA).	»	54
COLLAR CHICO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.	»	56
COLLAR (PROCESO DEL). . .	»	57
COLLATIO LEGUM MOSAICARUM, ET ROMANARUM.	»	58
COLLATIS CONSILIIS. . .	»	40
COLLAZO.	»	40
COMADRE.	»	41
COMADRE (*en sentido canónico*).	»	41
COMADRON.	»	44
COMANDA.	»	46
COMANDANCIA.	»	47
COMANDANTE.	»	47
COMANDANTE (EN ALABARDEROS).	»	48
COMANDANTE DE ARMAS.	»	48
COMANDANTE DE LAS ARMAS.	»	51
COMANDANTE DEL ARMA DE ARTILLERIA. . . .	»	58
COMANDANTES EN CABALLERIA.	»	65
COMANDANTES DEL CAMPO DE GIBRALTAR, O DE SAN ROQUE. . . .	»	64
COMANDANTES DE CANTON.	»	64
COMANDANTES DE CARABINEROS.	»	64
COMANDANTES DE CUARTEL.	»	67
COMANDANTES DE CUERPO.	»	68

	TOM.	PÁG.
COMANDANTES DE DISTRITO	X	74
COMANDANTES DE ESTADO MAYOR	»	74
COMANDANTES DE FUERTES	»	75
COMANDANTE GENERAL DE ALABARDEROS	»	77
COMANDANTE GENERAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR	»	77
COMANDANTE GENERAL DE CEUTA	»	78
COMANDANTES GENERALES DE PROVINCIA	»	79
COMANDANTES (EN LA GUARDIA CIVIL)	»	83
COMANDANTES DE INFANTERIA	»	94
COMANDANTES (EN EL ARMA DE INGENIEROS)	»	94
COMANDANTES DE INVALIDOS	»	99
COMANDANTES (EN LA MARINA)	»	101
COMANDANTES MILITARES	»	115
COMANDANTES DE PARTIDO	»	115
COMANDANTES DE PLAZA	»	116
COMANDANTES DE PRESIDIOS	»	116
COMANDANTES DEL RESGUARDO	»	116
COMANDANTES EN ULTRAMAR	»	116
COMANDITA (COMPAÑÍA EN COMANDITA)	»	116
COMBATE DE FEUDO	»	116
COMBATE JUDICIAL	»	117
COMBUSTION	»	117
COMBUSTION HUMANA ESPONTANEA	»	117
COMBUSTION DE SERES VIVIENTES POR EL RAYO	»	124
COMEDIA	X	125
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Orígen, vicisitudes é índole de la comedia, en el sentido genérico de este artículo	»	126
SEC. II. Juicio acerca de ella, de algunos filósofos y escritores moralistas, de los Santos Padres y Concilios	»	129
SEC. III. Vicisitudes de la comedia entre nosotros: disposiciones legales: juicio comparativo entre la comedia antigua y la moderna, por lo que hace á las costumbres	»	132
SEC. IV. Sobre la asistencia de los clérigos á la comedia	»	134
COMEDIANTE	»	136
COMENDADOR	»	136
COMENDADOR (EN SU ACEPCION CANÓNICA ANTIGUA)	»	136
COMENDADOR (EN LAS ÓRDENES MILITARES Ó RELIGIOSAS DE CABALLERÍA)	»	138
COMENDADOR (EN LAS ÓRDENES REGULARES)	»	144
COMENDADORA	»	146
COMENDADURIA	»	148
COMENDATARIO	»	149
COMENDATICIAS (LETRAS)	»	151
COMENDATICIO	»	154
COMENTADOR	»	154
COMENTAR	»	155
COMENTARIENSE	»	155
COMENTARIO	»	155
COMERCIANTE	»	157

TOM. PÁG.

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

Leyes del Fuero Juzgo. . . X 138
Leyes de las Partidas. . . . » 138
Leyes de la Novísima Recopilacion. . . . . » 139
Código de comercio. . . . . » 160
Disposiciones posteriores. . . » 165
Leyes de Indias. . . . . » 165
Legislacion estranjera. . . . » 166

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Reseña histórica. . . » 175
SEC. II. De los que en el derecho se reputan comerciantes. . . » 180
§. 1.° De la capacidad para ejercer el comercio. . . . . » 180
§. 2.° Inscripcion en la matrícula de comercio. . . . . » 191
§. 3.° Ejercicio habitual del comercio. . . . » 193
SEC. III. De las obligaciones impuestas á los comerciantes. . . » 199
§. 1.° De las obligaciones generales, impuestas á todos los comerciantes. . . » 199
§. 2.° De las obligaciones impuestas á determinadas profesiones comerciales. . » 206
SEC. IV. De los comerciantes estranjeros. . . » 206
SEC. V. De los comerciantes en Ultramar. . . » 208
COMERCIO. . . . . . » 209

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Etimología y acepciones de la enunciativa comercio. . X 209
SEC. II. Clasificacion: indicaciones generales. » 210
COMERCIO GENERAL. . » 212

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Comercio de los antiguos. . . . . » 212
SEC. II. Comercio en la edad media. . . . . » 218
SEC. III. Del comercio desde el descubrimiento de la América hasta nuestros dias. . » 221
SEC. IV. Apéndice, y resúmen. » 224
COMERCIO (ACTOS DE). . . » 225
COMERCIO DE CABOTAGE. . . . . . » 226
COMERCIO (CÓDIGO DE). . » 226
COMERCIO (COMPAÑÍA DE). » 226
COMERCIO (CÓNSULADO, CÓNSULES DE). . . . . . » 226
COMERCIO (ESCUELAS DE). » 226
COMERCIO ESPAÑOL. . . » 233

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Reseña histórico-jurídica del comercio de la península, dentro de sí, y con las otras naciones, desde el principio de la era comun. » 234
§. 1.° Época primera, ó sea época romana. . » 234
§. 2.° Época segunda, ó sea época gótica. . . » 235
§. 3.° Época tercera, desde la invasion de los sarracenos hasta las cruzadas. . . » 235
§. 4.° Época cuarta, desde las cruzadas hasta el descubrimiento del nuevo mundo. » 236

	TOM.	PÁG.
§. 5.° Epoca quinta, desde el descubrimiento del nuevo mundo, hasta el siglo XIX.	X	237
§. 6.° Epoca sesta, siglo XIX.	»	238
SEC. II. Del comercio español entre la Península y sus posesiones de Ultramar.	»	238
§. 1.° Del comercio de España y de sus Indias en general.	»	238
§. 2.° Del comercio de la isla de Cuba.	»	240
§. 3.° Del comercio de Puerto-Rico.	»	240
§. 4.° Del comercio de Filipinas.	»	240
Apéndice sobre Canarias y las Baleares.	»	241
COMERCIO DE EXPORTACION.	»	241
COMERCIO DE GRANOS.	»	242
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Nov. Recop.	»	243
Disposiciones posteriores.	»	230
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Indicaciones generales sobre el comercio de granos.	»	261
SEC. II. Indicaciones estadísticas.	»	263
SEC. III. Apéndice histórico-jurídico.	»	268
SEC. IV. Del comercio de granos, relativamente á las provincias de Ultramar.	»	274
COMERCIO DE IMPORTACION.	»	275
COMERCIO INTERIOR.	»	276
COMERCIO (JUNTA GENERAL DE).	X	276
COMERCIO (JUNTAS DE).	»	276
COMERCIO (JUNTAS DE FOMENTO DE).	»	281
COMERCIO LIBRE.	»	281
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR.	»	282
COMERCIO DE MONOPOLIO.	»	284
COMERCIO DE NEUTRALES	»	285
COMERCIO (SUBSIDIO DE).	»	286
COMERCIO (TRATADOS DE).	»	286
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Tratados, convenciones, etc. sobre comercio con diversas naciones.	»	287
§. 1.° Tratados de comercio con Inglaterra.	»	287
§. 2.° Id. con Francia.	»	300
§. 3.° Id. con Portugal.	»	307
§. 4.° Id. con Holanda.	»	308
§. 5.° Id. con Austria, Alemania y Hungría.	»	311
§. 6.° Id. con Dinamarca.	»	317
§. 7.° Id. con Génova.	»	318
§. 8.° Id. con Cerdeña.	»	320
§. 9.° Id. con la Puerta Otomana.	»	322
§. 10. Id. con Rúsia.	»	327
§. 11. Id. con Suécia.	»	327
§. 12. Id. con Prúsia.	»	327
§. 13. Id. con las Dos Sicilias.	»	327
§. 14. Id. con Bélgica.	»	335
§. 15. Id. con Marruecos.	»	337
§. 16. Id. con Trípoli.	»	345
§. 17. Id. con Argel.	»	346
§. 18. Id. con Túnez.	»	349
§. 19. Id. con los Estados-Unidos.	»	351
§. 20. Id. con Méjico.	»	354
§. 21. Id. con Nueva-Granada.	»	355

	TOM.	PÁG.
§. 22. Tratados de comercio con el Ecuador..	X	336
§. 23. Id. con Venezuela. .	»	358
§. 24. Id. con Chile. . .	»	360
§. 25. Id. con el Uruguay.	»	361
§. 26. Id. con Costa-Rica. .	»	362
§. 27. Id. con Nicaragua. .	»	363
§. 28. Id. con Santo Domingo.	»	364
§. 29. Id. con Joló. . . .	»	370
§. 30. Id. con Pérsia. . .	»	371
§. 31. Disposiciones recopiladas.	»	372
Sec. II. Consideraciones sobre la fuerza obligatoria de los tratados de comercio, reseñados en la seccion anterior. . .	»	375
COMERCIO (TRIBUNALES DE).	»	378
COMERCIO DE INDIAS. .	»	378
COMERCIO DE NEGROS: COMERCIO DE ESCLAVOS..	»	378
COMESTIBLE.	»	378
COMETER..	»	379
COMETIDO.	»	379
COMICIOS..	»	379
CÓMICOS.	»	385
COMISARÍA.	»	397
COMISARIO.	»	397
COMISARIO APOSTÓLICO.	»	397
COMISARIO DEL BREVE.	»	398
COMISARIO DE COMUNIDADES RELIGIOSAS. .	»	404
COMISARIO DE CÓRTE.	»	404
COMISARIO DE CRUZADA.	»	404
COMISARIO FORAL. . .	»	404
COMISARIO DE JERUSALEN..	»	405
COMISARIOS DE ÓRDENES RELIGIOSAS.. . .	»	405

	TOM.	PÁG.
COMISARIO RÉGIO DEL SENADO.	X	407
COMISARIO (REVISTA DE) .	»	408
COMISARIO DE AGRICULTURA..	»	431
COMISARIOS (EN EL ARMA DE ARTILLERÍA).	»	431
COMISARIOS DE AYUNTAMIENTO.	»	433
COMISARIOS DE BANCO. .	»	434
COMISARIOS DE BARRIO..	»	434
COMISARIOS DE GUERRA.	»	434
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.. .	»	435
Sec. II. Número, clases, deberes y atribuciones de los Comisarios de Guerra. .	»	436
Sec. III. Honores, distinciones y ventajas de los mismos.. . . .	»	439
Sec. IV. Personas que les sustituyen en caso de necesidad. . . .	»	441
COMISARIOS DE GUERRA (INSPECTOR GENERAL DE). .	»	450
COMISARIOS DE HOSPITALES MILITARES. . .	»	442
COMISARIOS, EN INGENIEROS.	»	450
COMISARIOS, EN MARINA. .	»	452
COMISARIOS DE MILLONES..	»	473
COMISARIOS DE MISIONES..	»	473
COMISARIOS DE MONTES..	»	476
COMISARIOS ORDENADORES.	»	483
COMISARIOS DE POBRES.	»	484
COMISARIOS DE POLICÍA..	»	484

	TOM.	PÁG.
COMISARIOS DE PRESIDIOS.	X	490
COMISARIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PÚBLICA.	»	490
COMISARIOS RÉGIOS.	»	490
COMISARIOS RÉGIOS DE AGRICULTURA.	»	491
COMISARIOS RÉGIOS DE BANCO.	»	491
COMISARIOS RÉGIOS DE ENAJENACION DE CAPELLANÍAS.	»	491
COMISARIOS RÉGIOS DE TEATROS.	»	491
COMISARIOS DE REGULARES DE ULTRAMAR.	»	492
COMISARIOS DE RELACIONES MERCANTILES.	»	493
COMISARIOS DE LOS SANTOS LUGARES.	»	495
COMISARIOS DEL SANTO OFICIO.	»	500
COMISARIOS DEL SENADO.	»	501
COMISARIOS TESTAMENTARIOS.	»	503
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de las Partidas.	»	503
Leyes de la Novísima Recopilacion.	»	503
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	505
Sec. II. Del nombramiento de comisario.	»	507
Sec. III. De las atribuciones y deberes de los comisarios.	»	508
§. 1.° Tiempo dentro del cual debe testar el comisario.	»	508
§. 2.° Solemnidades con que el comisario debe ordenar el testamento.	X	512
§. 3.° Atribuciones del comisario en la ordenacion del testamento.	»	515
§. 4.° Discordia entre los comisarios.	»	519
§. 5.° Modo de suplir la omision del comisario, cuando no hace testamento.	»	521
COMISARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.	»	521
COMISION.	»	521
COMISION DE ALUMBRAMIENTO DE REINAS.	»	523
COMISION APOSTÓLICA DEL SUBSIDIO ECLESIÁSTICO.	»	523
COMISION DE LA CARTA ITINERARIA.	»	524
COMISION DE CENTRALIZACION DE CRÉDITOS.	»	524
COMISION DE CÓDIGOS.	»	523
COMISION DE CRÉDITOS DE AMÉRICA.	»	525
COMISION DE CRÉDITOS ESTRANJEROS.	»	526
COMISION DE ARREGLO DE LA DEUDA.	»	526
COMISION (EN LO ECLESIASTICO).	»	526
COMISION (EMPLEADOS EN).	»	529
COMISION (EMPLEOS Y CARGOS QUE TIENEN EL CONCEPTO DE).	»	531
COMISION DE ESPOLIOS.	»	532
COMISION DE FAROS.	»	534
COMISION DE FERRO-CARRILES.	»	534
COMISION HIDROGRÁFICA.	»	534
COMISION IMPERIAL.	»	534
COMISION DE INDEMNI-		

	TOM.	PÁG.
ZACIONES DE GUERRA..	X	534
COMISION DE INSCRIPCIONES.	»	534
COMISION INSPECTORA DE LA DEUDA	»	534
COMISION DE JUROS. . .	»	534
COMISION DE LA CARTA DEL MAPA GEOLÓGICO.	»	534
COMISION EN LO MERCANTIL.	»	537
COMISION MILITAR PERMANENTE DE LA HABANA.	»	539
COMISION DE MILLONES.	»	540
COMISION MISTA SOBRE EL TRÁFICO NEGRERO.	»	540
COMISION DE PENSIONES DE ESCLAUSTRADOS. .	»	545
COMISION DE PESOS Y MEDIDAS.	»	545
COMISION DE PÓSITOS. .	»	545
COMISION DE REEMPLAZO PARA AMÉRICA. . .	»	545
COMISION DEL SISTEMA MÉTRICO.	»	546
COMISION DE SUMINISTROS Y DAÑOS DE GUERRA..	»	546
COMISION SUPUESTA. .	»	546
COMISIONES..	»	546
COMISIONES ACTIVAS. .	»	547
COMISIONES (ACUMULACION DE).	»	549
COMISIONES DE AGRAVIOS..	»	549
COMISIONES DE AGRICULTURA.	»	551
COMISIONES DE AMORTIZACION.	»	551
COMISIONES DE ANIVERSARIOS.	»	551
COMISIONES DE APREMIO.	»	551
COMISIONES DE ARCHIVOS.	»	553
COMISIONES DE ARREGLO; DE LIQUIDACION; DE CONSOLIDACION DE LA DEUDA..	X	553
COMISIONES DE ATRASOS DE HACIENDA.. .	»	553
COMISIONES DE AVALÚO Ó EVALUACION DE LA RIQUEZA TERRITORIAL.	»	553
COMISIONES DEL BANCO.	»	555
COMISIONES DE BENEFICENCIA.	»	555
COMISIONES DE BIBLIOTECAS.	»	555
COMISIONES DE BIENES DE ANIVERSARIOS. . .	»	556
COMISIONES DE BIENES DE INSTRUCCION PÚBLICA.	»	556
COMISIONES DE CAMINOS..	»	556
COMISIONES DE CASA REAL.	»	556
COMISIONES DE CLASIFICACION DE EMPLEADOS.	»	557
COMISIONES DEL CONGRESO.	»	557
COMISIONES DE CONSOLIDACION DE LA DEUDA.	»	559
COMISIONES DE CONTRIBUCIONES..	»	559
COMISIONES DE LAS CÓRTES..	»	559
COMISIONES DE CUENTAS DE SUMINISTROS. . . .	»	560
COMISIONES DE CULTO Y CLERO..	»	560
COMISIONES DE LA DEUDA.	»	560
COMISIONES DE ESTADÍSTICA.	»	560
COMISIONES DE ESTINCION DE LA LANGOSTA. . . .	»	560
COMISIONES DE GANADEROS..	»	560

	TOM.	PÁG.
COMISIONES DE HACIENDA EN EL ESTRANJERO. . .	X	562
COMISIONES (INCOMPATIBILIDAD DE).	»	566
COMISIONES INCOMPATIBLES.	»	566
COMISIONES DE INDEMNIZACION POR DAÑOS DE LA GUERRA.	»	567
COMISIONES DE INSTRUCCION PÚBLICA.	»	567
COMISIONES INVESTIGADORAS.	»	567
COMISIONES INVESTIGADORAS DE BIENES DE BENEFICENCIA.	»	574
COMISIONES (EN LO JUDICIAL).	»	574
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Del nombramiento en comision de empleados en la administracion de justicia.. . . .	»	575
SEC. II. De las comisiones para administrar justicia en negocios determinados.. .	»	580
SEC. III. De las comisiones para ejecutar actos y diligencias judiciales.	»	585
SEC. IV. Comisiones judiciales en Ultramar. . .	»	587
COMISIONES DE LECTURA DE PIEZAS DRAMÁTICAS..	»	591
COMISIONES DE LIQUIDACION.	»	591
COMISIONES DE LIQUIDACION DE ATRASOS DE GUERRA..	»	591
COMISIONES DE LIQUIDACION DE ATRASOS DE HACIENDA.	»	591
COMISIONES DE LIQUIDACION DE CRÉDITOS FRANCESES.	X	591
COMISIONES DE MEJORAMIENTO DE LA RAZA CABALLAR.	»	593
COMISIONES DE LA MESTA.	»	593
COMISIONES MILITARES. .	»	595
COMISIONES DE MONTEPÍO..	»	596
COMISIONES DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.	»	596
COMISIONES DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA. . .	»	606
COMISIONES OFICIALES. .	»	606
COMISIONES PASIVAS. . .	»	607
COMISIONES DE PENSIONES DE ESCLAUSTRADOS. . .	»	607
COMISIONES DE RECAUDACION DE TEMPORALIDADES..	»	607
COMISIONES RÉGIAS DE AGRICULTURA.	»	607
COMISIONES DE SALUBRIDAD.	»	609
COMISIONES DE SANIDAD.	»	611
COMISIONES DE SECUESTRO..	»	611
COMISIONES DEL SENADO.	»	611
COMISIONES CON SUELDO.	»	611
COMISIONES SIN SUELDO. .	»	612
COMISIONES DEL TRÁFICO DE NEGROS.	»	612
COMISIONES DE VALIMIENTO.	»	612
COMISIONES DE VENTA DE BIENES NACIONALES. . .	»	612
COMISIONADO.	»	612
COMISIONADOS DE APREMIO..	»	612
COMISIONADOS DE ARBITRIOS DE AMORTIZACION.	»	613
COMISIONADOS DEL BANCO.	»	613

	TOM.	PÁG.
COMISIONADOS DE CÓNGRUAS.	X	61
COMISIONADOS DE CRÉDITO PÚBLICO.	»	613
COMISIONADOS DEL DISTRITO ELECTORAL.	»	613
COMISIONADOS DE VENTAS DE BIENES NACIONALES.	»	613
COMISIONARIO.	»	615
COMISIONISTA.	»	615
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Código de Comercio.	»	615
Disposiciones posteriores.	»	621
Legislacion estranjera	»	622
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	630
Sec. II. De la capacidad, personalidad y carácter de los comisionistas.	»	641
§. 1.° Capacidad legal para ser comisionista.	»	641
§. 2.° Personalidad y facultades de los comisionistas.	»	642
§. 3.° Carácter especial de los comisionistas.	»	645
Sec III. De las obligaciones y derechos entre el comisionista y el comitente.	»	647
§. 1.° Obligaciones del comisionista para con el comitente.	»	647
§. 2.° Obligaciones del comitente para con el comisionista.	»	659
§. 3.° Derechos entre el comisionista y el comitente.	»	662
Sec. IV. De los efectos que produce el contrato celebrado entre el comisionista y un tercero	X	666
Sec. V. De algunos comisionistas especiales.	»	670
§. 1.° Comisionistas de compras.	»	670
§. 2.° Comisionistas de ventas.	»	672
§ 3.° Comisionistas de trasportes.	»	673
§. 4.° Comisionistas de operaciones de cambio.	»	675
§. 5.° Comisionistas de seguros.	»	675
Sec. VI. De los comisionistas en Ultramar.	»	677
COMISO.	»	677
COMISO (EN CAUSAS DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION A LA HACIENDA PUBLICA).	»	678
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Consideraciones generales sobre el sistema fiscal de comisos, y de premios á los aprehensores y cooperadores.	»	678
Sec. II. Diversos casos en que tiene lugar el comiso.	»	681
§. 1.° Comiso por tráfico de géneros estancados.	»	681
§. 2.° Comiso por tráfico en géneros de ilícito comercio.	»	682
§. 3.° Comiso por defraudacion á la Hacienda pública.	»	683
Sec. III. Declaracion del comiso: procedimiento.	»	683

	TOM.	PÁG.
Sec. IV. Segregaciones del comiso: venta del resto, y distribucion del importe..	X	687
Sec. V. Avalúo y venta de los efectos del comiso.	»	689
§. 1.° Avalúo de efectos para la venta..	»	690
§. 2.° Venta de los géneros del comiso.	»	690
Sec. VI. Distribucion del importe de las ventas.	»	693
Sec. VII. Consideraciones sobre ventas de efectos de comisos.	»	697
Sec. VIII. Legislacion estrangera sobre contrabando, comisos y premios.	»	698
Sec. IX. Declaracion y apéndice.	»	699
COMISO EN LOS CONTRATOS.	»	717
COMISO (POR DELITOS COMUNES Y FALTAS).	»	720
COMISO DE DERECHO DE GENTES.	»	722
COMISO DE DERECHO INTERNACIONAL	»	722
COMISO EN EL TRÁFICO DE NEGROS.	»	722
COMISORIA (PACTO DE LA LEY).	»	722
COMISORIO (PACTO).	»	724
COMITATUS.	»	727
COMITÉ.	»	727
COMITENTE.	»	727
COMITIVA.	»	728
COMITRE.	»	728
COMITATUR.	»	729
COMODATO.	»	730
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario		
Leyes de las Partidas.	»	731
Código penal..	X	733
Legislacion estranjera..	»	733
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña jurídico-doctrinal.	»	739
Sec. II. Naturaleza del comodato..	»	742
Sec. III. Obligaciones y derechos del comodante y comodatario.	»	745
§. 1.° Obligaciones y derechos del comodatario..	»	743
§. 2.° Obligaciones y derechos del comodante.	»	745
Sec. IV. Acciones que nacen del comodato..	»	746
Sec. V. Cuestiones y consideraciones comunes á las secciones anteriores..	»	747
Sec. VI. Continuacion del mismo asunto..	»	754
Sec. VII. Continuacion del mismo asunto, y conclusion..	»	761
COMPACTO.	»	768
COMPACTO DE ALTERNATIVA.	»	768
COMPACTO DE BRETAÑA.	»	770
COMPACTO DE CARDENALES.	»	771
COMPADRAZGO: COMPATERNIDAD.	»	773
COMPADRE.	»	773
COMPAÑERO.	»	773
COMPAÑÍA	»	775
COMPAÑÍA CÓMICA.	»	774
COMPAÑÍA DE JESUS.	»	774
COMPAÑÍA MERCANTIL Ó DE COMERCIO.	»	774
COMPAÑÍA MILITAR.	»	775

	TOM.	PÁG.
COMPAÑÍAS DE PRIVILEGIO.	X	776
COMPARECENCIA: COMPARECER.	»	781
COMPARECENCIA (EN EL ORDEN GUBERNATIVO).	»	781
COMPARECENCIA: COMPARECER (EN LO JURÍDICO).	»	783
COMPARECENCIA (EN LO MERCANTIL).	»	785
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Código de Comercio.	»	785
Ley de Enjuiciamiento mercantil.	»	786
Disposiciones posteriores.	»	789
PARTE DOCTRINAL.		
SEC. ÚNICA. Consideraciones sobre la legislacion de la comparecencia en lo mercantil.	»	789
COMPARECENCIA (EN LO ECLESIASTICO).	»	793
COMPARECENCIA (EN LO MILITAR).	»	792
COMPARECER EN JUICIO.	»	795
COMPARECER EN JUICIO (HABILITACION PARA).	»	795
COMPARECIENTE.	»	795
COMPARENDO.	»	795
COMPATIBLE.	»	794
COMPELER.	»	794
COMPENSACION.	XI	5
COMPENSACION (EN LO JURÍDICO).	»	6
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Legislacion española.	»	6
§. 1.° Leyes de las Partidas.	»	6
§. 2.° Ley de Enjuiciamiento civil.	»	9
§. 3.° Código de Comercio.	XI	9
§. 4.° Ley de Enjuiciamiento en lo mercantil.	»	9
§. 5.° Leyes de Indias.	»	10
SEC. II. Legislacion estranjera.	»	10
§. 1.° Derecho Romano.	»	10
§. 2.° Códigos estranjeros modernos.	»	13
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña jurídico-doctrinal. Diversas especies de compensacion.	»	16
SEC. II. Conveniencia y naturaleza de la compensacion.	»	19
§. 1.° Conveniencia de la compensacion.	»	19
§. 2.° Naturaleza de la misma.	»	20
SEC. III. Efectos de la compensacion.	»	23
SEC. IV. Requisitos necesarios para la compensacion, en sí, y en sus efectos.	»	24
§. 1.° Requisitos para la compensacion, en sí, ó por parte de su orígen.	»	25
§. 2.° De la compensacion por parte de las personas, mútuamente obligadas.	»	27
§. 3.° De la compensacion por parte del juzgador.	»	28
SEC. V. De la compensacion, comparada con la retencion y con la mútua peticion.	»	29
SEC. VI. De la forma y del		

	TOM.	PÁG.
tiempo de interponer en juicio la compensacion. .	XI	31
SEC. VII. Cuestiones prácticas y de derecho comparado..	»	34
SEC. VIII. Continuacion del mismo asunto.. .	»	39
SEC. IX. De la compensacion en lo mercantil. .	»	43
SEC. X. De la compensacion con el fisco.. . .	»	44
SEC. XI. De la compensacion en deudas del concejo..	»	45
SEC. XII. De la compensacion en lo penal. . .	»	48
SEC. XIII. De la compensacion en lo canónico.. .	»	50
SEC. XIV. De la compensacion en Ultramar. . .	»	54
COMPENSACION ADMINISTRATIVA.	»	54
COMPETENCIA.	»	61
COMPETENCIA ADMINISTRATIVA.	»	62
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Disposiciones posteriores á la Novísima Recop. .	»	63
Leyes de Indias..	»	72
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	75
SEC. II. De las atribuciones que constituyen la competencia administrativa. . . .	»	77
§. 1.° Competencia de la Administracion en general. . . .	»	77
§. 2.° Actos de la Administracion activa. .	»	79
§. 3.° Actos de la Administracion contenciosa..	XI	81
SEC. III. De las atribuciones de la Administracion en sus relaciones con el poder legislativo. .	»	86
SEC. IV. De las atribuciones de la Administracion en sus relaciones con el órden judicial.	»	88
§. 1.° Principios generales en que se funda la competencia respectiva de las autoridades administrativas y judiciales.	»	90
§. 2.° De las prohibiciones impuestas á las autoridades judiciales respecto á los negocios administrativos.. . .	»	92
Prohibicion 1.ª Adoptar medidas generales, ni aun en lo que se refiere á la administracion de justicia.. . . .	»	92
Prohibicion 2.ª Mezclarse en actos de la Administracion. . .	»	93
Prohibicion 3.ª Conocer de los contratos celebrados por la Administracion para servicios y obras públicas.. . . .	»	93
Prohibicion 4.ª Conocer de los litigios acerca de la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de bienes nacionales y actos po-		

	TOM.	PÁG.
sesorios derivados de ellas y de los contratos de ventas de bienes nacionales.	XI	101
Prohibicion 5.ª Admitir interdictos contra las providencias de la Administracion en el círculo de sus atribuciones.	»	105
Prohibicion 6.ª Conocer ejecutivamente por deudas de la Administracion. .	»	117
Prohibicion 7.ª Entender en el apeo y deslinde de los montes correspondientes al Estado, á las provincias, á los pueblos, ó á establecimientos públicos.	»	132
Prohibicion 8.ª Conocer de la calificacion de los títulos de los partícipes legos en diezmos. . . .	»	136
§. 3.° Prohibiciones de las autoridades administrativas respecto de los negocios judiciales. . . .	»	137
Prohibicion 1.ª Mezclarse en las cuestiones de estado civil, de capacidad, de domicilio, de propiedad, de contratos civiles, y de sucesion testada ó intestada.	»	137
Prohibicion 2.ª Provocar competencias en los negocios criminales, cuyo conocimiento no esté espresamente reservado á la Administracion.. . . .	XI	145
Prohibicion 3.ª Provocar competencias en los negocios de comercio, en primera instancia. . .	»	152
Prohibicion 4.ª Provocar competencias en los actos y juicios seguidos ante los jueces de paz.	»	153
Prohibicion 5.ª Provocar competencias en juicios cuyas sentencias hayan sido ejecutoriadas. . .	»	154
§. 4.° Prohibiciones comunes á las autoridades administrativas y judiciales en el ejercicio de sus funciones respectivas.	»	155
Prohibicion 1.ª Entender las unas en cuestiones de la atribucion de las otras, cuando incidentalmente vienen en los negocios, que ante ellas respectivamente se ventilan.	»	155
Prohibicion 2.ª Interpretar las unas los actos de las otras..	»	162
SEC. V. De la obligacion de las autoridades administrativas y judiciales de auxiliarse mútuamente. .	»	165
SEC. VI. De las competencias suscitadas entre las		

	TOM.	PÁG.
autoridades administrativas y las judiciales.. . . .	XI	167
§. 1.° Quiénes pueden promover las competencias entre las autoridades administrativas y las judiciales. . . .	»	167
§. 2.° Sobre qué negocios puede promoverse competencia entre las autoridades administrativas y las judiciales. . . .	»	173
§. 3.° Con qué formas han de promoverse las competencias entre las autoridades administrativas y las judiciales. . . .	»	178
§. 4.° A quién toca resolver las competencias entre las autoridades administrativas y las judiciales.	»	186
SEC. VII. De la autorizacion que necesitan los tribunales para encausar á los empleados de la administracion por abusos en el ejercicio de sus funciones.. .	»	187
SEC. VIII. De la competencia respectiva de las diferentes autoridades administrativas.	»	217
SEC. IX. De la competencia administrativa en Ultramar. . . .	»	220
Apéndice. Ley orgánica del Consejo de Estado, de 17 de agosto de 1860. .	»	234
COMPETENCIA (BENEFICIO DE).	XI	236
COMPETENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.	»	237
COMPETENCIA (CONTIENDA Ó CUESTION DE).	»	237
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Leyes de la Novísima Recop..	»	239
Disposiciones posteriores hasta la ley de Enjuiciamiento civil. .	»	243
Ley de Enjuiciamiento civil y disposiciones posteriores. . . .	»	250
Código de Comercio. . . .	»	253
Ley de Enjuiciamiento mercantil.	»	253
Código penal.	»	253
Legislacion de Indias. . . .	»	253
Derecho canónico.	»	258
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica y jurídica. . . .	»	259
SEC. II. De los tribunales y autoridades á quienes corresponde dirimir las cuestiones de competencia.	»	269
§. 1.° De los tribunales á quienes corresponde dirimir las competencias entre jueces seculares. .	»	269
§. 2.° De la autoridad á quien corresponde dirimir las competencias entre jueces eclesiásticos. .	»	277
SEC. III. Modo de promover, sustanciar y decidir las cuestiones de compe-		

	TOM.	PÁG.
tencia en asuntos civiles.	XI	278
§. 1.° Modo de promover estas cuestiones. .	»	279
§. 2.° Quién puede promover las cuestiones de competencia en asuntos civiles.	»	283
§. 3.° Término para promover las cuestiones de competencia en asuntos civiles.	»	290
§. 4.° Procedimientos en los juzgados ó tribunales contendientes.	»	291
§. 5.° Procedimientos en el tribunal dirimente.	»	296
§. 6.° De las cuestiones de competencia entre jueces de paz. . .	»	301
SEC. IV. Modo de promover, sustanciar y decidir las cuestiones de competencia en asuntos criminales.	»	303
§. 1.° Por quién y de qué modo pueden promoverse estas contiendas en causas criminales. . . .	»	303
§. 2.° Procedimientos para promover y dirimir las cuestiones de competencia en asuntos criminales.	»	306
§. 3.° De las cuestiones de competencia en juicios verbales sobre faltas. . . .	»	309
SEC. V. De las competencias negativas. . . .	»	310
SEC. VI. Casos en que no pueden promoverse cuestiones de competencia. . .	XI	311
SEC. VII. Disposiciones penales.	»	317
SEC. VIII. De las cuestiones de competencia en Ultramar. . . .	»	321
§. 1.° Tribunales á quienes corresponde dirimirlas.	»	323
§. 2.° Procedimientos. . .	»	329
COMPETENCIA DE DERECHO DE GENTES.	»	332
COMPETENCIA (EN LO ECLESIASTICO).	»	334
COMPETENCIA INTERNACIONAL.	»	334
COMPETENCIAS (JUNTA SUPREMA DE).	»	335
COMPETENCIA JURÍDICA. .	»	335
COMPETENCIA (EN ULTRAMAR).	»	335
COMPETENTE.	»	335
COMPETENTE (EN LO CANÓNICO).	»	336
COMPETENTEMENTE. . . .	»	336
COMPETER.	»	336
COMPETIDOR.	»	336
COMPETIR.	»	336
COMPILACION.	»	336
COMPILADOR.	»	338
COMPILAR.	»	338
COMPLETAS.	»	339
COMPLETORIO.	»	343
COMPLEXION.	»	343
COMPLICADO: COMPLICAR: COMPLICACION.	»	344
CÓMPLICE.	»	345
CÓMPLICE (EN EL FUERO PENAL COMUN).	»	349
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Derecho español. .	»	350
Leyes del Fuero Juzgo. .	»	350

	TOM.	PÁG.
Leyes del Fuero Real.. .	XI	351
Id. de Partida.	»	352
Id. de la Novísima Recopilacion.	»	353
Código penal.	»	354
SEC. II. Legislacion estranjera..	»	356
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	359
SEC. II. Teoría de la complicidad. . . .	»	370
SEC. III. De la complicidad segun el Código penal de 1850. . .	»	378
§. 1.° Quiénes se dicen cómplices.	»	379
§. 2.° Penas de los cómplices.	»	385
§. 3.° Responsabilidad civil de los cómplices..	»	392
SEC. IV. Consideraciones de derecho comparado y de aplicacion.	»	397
SEC. V. Del testimonio del cómplice en la prueba.	»	408
SEC. VI. De la complicidad, segun las leyes de Ultramar. . . .	»	418
CÓMPLICE (EN LO CANÓNICO).	»	419
PARTE LEGISLATIVA.		
Derecho canónico. . . .	»	420
PARTE DOCTRINAL.		
SEC. ÚNICA. Indicaciones generales sobre el estado de la legislacion canónica, acerca de la complicidad, y del valor probatorio del testimonio del cómplice.	»	421
CÓMPLICE (EN DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA).	XI	427
CÓMPLICE (EN DELITOS DE IMPRENTA).	»	428
CÓMPLICE (EN DERECHO MERCANTIL).	»	432
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Legislacion española.	»	432
Código de Comercio. . .	»	432
Código penal.	»	434
SEC. II. Legislacion estranjera.	»	434
PARTE DOCTRINAL.		
SEC. ÚNICA. Consideraciones de derecho comparado y de aplicacion.	»	436
CÓMPLICE (EN LO MILITAR).	»	443
COMPLICIDAD.	»	444
COMPLOT.	»	445
COMPONEDOR (AMIGABLE). .	»	445
COMPONENDA.	»	445
COMPONERSE: COMPOSICION: COMPOSTURA ENTRE PARTES.	»	446
COMPOSICION (BULA DE). .	»	446
COMPOSICION (EN MATERIA CRIMINAL).	»	448
COMPOSICION (DE TIERRAS Y ENCOMIENDAS).	»	452
COMPRA-VENTA.	»	453
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Derecho español. . .	»	456
Leyes del Fuero-Juzgo. .	»	456
Id. del Fuero Viejo de Castilla.	»	459
Id. del Fuero Real.. . .	»	461
Leyes del Estilo. . . .	»	463
Leyes de Partida. . . .	»	464
Id. del Ordenamiento de Alcalá..	»	476
Id. de la Novísima Recop..	»	476
Disposiciones posteriores..	»	481
Ley hipotecaria de 1860. .	»	482

	TOM.	PÁG.
Código penal.	XI	484
SEC. II. Legislacion estranjera.	»	485
Derecho Romano. . . .	»	485
Códigos modernos estranjeros.	»	500

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Reseña histórico-jurídica: consideraciones generales. .	»	525
SEC. II. Naturaleza de la compra-venta.. .	»	530
SEC. III. De la forma del contrato de venta. .	»	533
§. 1.° Diversos modos de celebrar el contrato.	»	535
§. 2.° Compra-venta simple: compra-venta condicional.. . .	»	536
§. 3.° Licitacion voluntaria y necesaria. .	»	537
§. 4.° Venta judicial. . .	»	538
§. 5.° Venta forzosa. . .	»	539
§. 6.° Compra forzosa. .	»	539
§. 7.° Sobre otorgamiento de escritura. . .	»	540
§. 8.° Registro público ó de hipotecas. . .	»	552
SEC. IV. Quiénes pueden vender y comprar. .	»	564
SEC. V. Del consentimiento y de la perfeccion del contrato. . .	»	577
§. 1.° Del consentimiento.	»	578
§. 2.° De la perfeccion del contrato. . . .	»	583
§. 3.° Acciones que nacen del contrato. . .	»	587
SEC. VI. De las cosas vendibles, y de la cosa vendida. . . .	»	588
§. 1.° De las cosas vendibles..	»	588
§. 2.° De la cosa vendida.	»	605
§. 3.° Venta alternativa ó disyuntiva de cosas.	XI	620
§. 4.° Venta sucesiva de una misma cosa á dos ó mas compradores.	»	625
§. 5.° Venta de cosa agena.	»	632
§. 6.° Venta de cosas aun no existentes: de cosas y derechos contingentes: de la esperanza. . .	»	635
§. 7.° Venta de herencia. .	»	660
§. 8.° Venta de cosechas pendientes. . .	»	669
§. 9.° Venta de créditos y otros derechos incorporales.. . .	»	670
§. 10. Venta de derechos y cosas litigiosas. .	»	671
§. 11. Empeño de la cosa vendida. . . .	»	680
§. 12. De la entrega de la cosa vendida. . .	»	681
SEC. VII. Del precio y del pago: consumacion del contrato. . .	»	686
§. 1.° Del precio. . . .	»	686
§. 2.° Del pago	»	691
§. 3.° Consumacion del contrato.	»	691
§. 4.° De la compra con dinero ajeno. . . .	»	694
SEC. VIII. De la arra ó señal.	»	695
SEC. IX. Del vendedor: resúmen de sus obligaciones y derechos.	»	700
SEC. X. Del comprador: resúmen de sus obligaciones y derechos.	»	701
SEC. XI. Condiciones. . .	»	701
SEC. XII. Pactos.. . . .	»	702
§. 1.° Pactos en general. .	»	702
§. 2.° Pacto de la ley comi-		

	TOM.	PÁG.
soria.	XI	702
§. 3.° Pacto de adicion *in diem*.	»	703
§. 4.° Pacto de retroventa.	»	705
§. 5.° Pacto de preempcion, ó preferencia por el tanto. . . .	»	709
SEC. XIII. Consecuencias naturales del contrato.	»	709
SEC. XIV. Nulidad del contrato: venta de cosa empeñada.. . .	»	709
§. *único*. Fuerza, miedo, dolo: venta de la cosa empeñada. . . .	»	710
SEC. XV. Rescision. . . .	»	711
§. 1.° Condiciones y acciones rescisorias y resolutorias. . .	»	711
§. 2.° Lesion..	»	712
§. 3.° Causas redibitorias.	»	715
§. 4.° Acciones redibitoria y *quanti minoris*. .	»	713
SEC. XVI. Retracto. . . .	»	715
SEC. XVII. Convenciones de naturaleza dudosa de venta: venta estimatoria. . . .	»	715
SEC. XVIII. Promesa de venta; de no vender, ó de no hacerlo sino en forma determinada.	»	716
COMPRA-VENTA MERCANTIL.	»	717

PARTE LEGISLATIVA.

Sumario.

SEC. I. Derecho español. .	»	717
Novísima Recopilacion.	»	718
Código de Comercio.	»	720
Código penal.. . .	»	723
Disposiciones posteriores.	»	723
SEC. II. Legislacion estranjera.	»	726

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. Reseña histórico-jurídica.	XI	736
SEC. II. Naturaleza de la compra-venta mercantil.	»	740
SEC. III. De la forma y clasificacion de la compra-venta mercantil.	»	746
§. 1.° De los diferentes modos de celebrarse este contrato. . .	»	746
§. 2.° De las clases en que se divide la compra-venta mercantil.	»	750
SEC. IV. De los requisitos ó condiciones de la compra-venta mercantil. . . .	»	757
§. 1.° De la capacidad para formalizar el contrato de compra-venta mercantil..	»	757
§. 2.° Del consentimiento. .	»	760
§. 3.° De las cosas, que son objeto de la compra-venta mercantil.	»	760
§. 4.° Del precio.. . . .	»	763
SEC. V. De los derechos y obligaciones que nacen de la compra-venta mercantil.	»	765
§. 1.° De las obligaciones del vendedor. . .	»	766
§. 2.° De las obligaciones del comprador. .	»	772
§. 3.° De los derechos del comprador y del vendedor. . . .	»	775
SEC. VI. Del cumplimiento y estincion de las		

	TOM.	PÁG.
obligaciones, nacidas de la compra-venta mercantil. .	XI	776
COMPRA-VENTA (EN ULTRAMAR).	»	780
COMPRA-VENTA DE BIENES NACIONALES.	XII	5
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Leyes y disposiciones de aplicacion general, y relativas á los bienes del Estado y de corporaciones civiles . .	»	8
SEC. II. Leyes y disposiciones sobre bienes del clero secular y regular, de las órdenes militares, cofradías, obras pías y santuarios. . .	»	68
SEC. III. Leyes y disposiciones sobre venta de montes públicos. .	»	77
SEC. IV. Disposiciones para la venta de las fábricas de salitre, azufre y pólvora. . .	»	80
SEC. V. Leyes relativas á la venta de salinas y minas del Estado..	»	82
SEC. VI. Ley é instruccion para la venta de pequeños terrenos ó parcelas, que por sí solos no formen solares edificables. .	»	83
SEC. VII. Leyes y disposiciones sobre los bienes del patrimonio de la Corona. . .	»	85
SEC. VIII. Legislacion de Indias: disposiciones sobre la venta de bienes de las órdenes religiosas suprimidas en la isla de Cuba. . . .	XII	91
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De los bienes declarados en estado de venta en concepto de nacionales: escepciones: division y clasificacion de los mismos. . .	»	94
§. 1.° Bienes del Estado.. .	»	95
§. 2.° Bienes del clero; de las órdenes militares; de cofradías, obras pías y santuarios, y demás manos muertas eclesiásticas. . . .	»	96
§. 3.° Bienes de propios y comunes de los pueblos.	»	104
§ 4.° Bienes de beneficencia y de instruccion pública. . . .	»	105
§. 5.° Bienes del patrimonio de la Corona.. . .	»	107
§. 6.° Division y clasificacion de los bienes nacionales para los efectos de las ventas..	»	108
SEC. II. De los funcionarios que intervienen en estas ventas á nombre del Estado: atribuciones respectivas de los mismos, y recursos contra sus providencias.	»	110
SEC. III. De los requisitos y solemnidades para la venta de bienes nacionales.	»	116

	TOM.	PÁG.
§. 1.° Clasificacion, medida y tasacion de las fincas.	XII	117
§. 2.° Division de las fincas rústicas que lo permitan.	»	120
§. 3.° Capitalizacion. . . .	»	121
§. 4.° Anuncios y término para las subastas: lugar donde han de celebrarse.	»	122
§. 5.° Condiciones de las subastas.	»	124
§. 6.° Celebracion de la subasta y remate: personas que pueden hacer postura.	»	126
§. 7.° Segunda y ulteriores subastas por falta de postor en las anteriores.	»	131
§. 8.° Aprobacion del remate y adjudicacion de las fincas: sorteo en los casos de empate.	»	133
§. 9.° Liquidacion de cargas.	»	134
§. 10. Notificacion al rematante de la adjudicacion de la finca: pago del primer plazo.	»	136
§. 11. Cesion del remate. .	»	140
§. 12. Posesion al comprador, y sus efectos.	»	141
§. 13. Escritura de venta y su registro.	»	142
§. 14. Derechos de los espedientes de subasta.	»	148
SEC. IV. De las obligaciones y derechos de los compradores de bienes nacionales.	»	148
§. 1.° Obligaciones del comprador.	»	149
§. 2.° Derechos del comprador.	XII	152
SEC. V. Del precio: plazos y forma en que ha de pagarse. . . .	»	154
SEC. VI. De los procedimientos contra los compradores por falta de pago. . . .	»	159
§. 1.° De la quiebra por falta de pago del primer plazo, y sus efectos.	»	159
§. 2.° Del procedimiento de apremio y quiebra, por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero. .	»	162
SEC. VII. Del derecho de tanteo en las ventas de bienes nacionales.	»	167
SEC. VIII. De la subrogacion en hipotecas especiales de las generales á que estén afectos los bienes nacionales puestos en venta. . . .	»	169
§. 1.° Casos y forma de la subrogacion. . .	»	170
§. 2.° Procedimiento gubernativo para la subrogacion. . . .	»	173
SEC. IX. De las incidencias de ventas de bienes nacionales.	»	174
§. 1.° Nulidad de la venta, y sus efectos. . . .	»	175
§. 2.° Error en la cosa: ventas de cuerpos ciertos.	»	177
§. 3.° Error en el precio. .	»	187
§. 4.° Falta de consentimiento.	»	190
§. 5.° Defectos en las subastas.	»	191
§. 6.° Nuevas cargas, no re-		

	TOM.	PÁG.
bajadas del capital.	XII	192
§. 7.° Competencia para conocer de las incidencias de ventas.	»	193
§. 8.° Procedimientos y recursos.	»	201
SEC. X. De la venta de censos.	»	204
SEC. XI. De la venta de montes públicos. . .	»	208
SEC. XII. De la venta de las fábricas de salitre, azufre y pólvora.	»	210
SEC. XIII. De la venta de minas y salinas del Estado.	»	211
SEC. XIV. De la venta de los pequeños terrenos ó parcelas, que por sí solos no forman solares edificables.	»	213
SEC. XV. De la venta de los bienes del patrimonio de la Corona.	»	214
SEC. XVI. De la venta de bienes nacionales en Ultramar. . . .	»	215
COMPROBACION, COMPROBAR.	»	219
COMPROMISARIO.	»	219
COMPROMISO (EN GENERAL).	»	219
COMPROMISO (EN LO JUDICIAL).	»	220
COMPROMISO (EN LO CANÓNICO).	»	221
COMPROMISO (EN LO POLÍTICO).	»	221
COMPTOS.	»	222
COMPULSA.	»	222
COMPULSION.	»	223
COMPURGADORES. . . .	»	225
COMPUTACION.	»	225
CÓMPUTO.	XII	224
COMUN.	»	225
COMUN, COMUNES.	»	225
COMUNALES, COMUNES (BIENES DE LOS PUEBLOS). . . .	»	226
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Naturaleza y carácter distintivo de los bienes comunes de los pueblos. . .	»	226
SEC. II. Reseña histórica.. .	»	229
SEC. III. Derecho actual sobre bienes comunes: requisitos para esceptuarlos de la desamortizacion. .	»	231
SEC. IV. Régimen, conservacion y aprovechamiento de los bienes comunes. . .	»	237
COMUNEROS.	»	243
COMUNICACION.	»	243
COMUNIDAD.	»	244
COMUNIDAD DE BIENES (ENTRE CÓNYUGES).	»	245
COMUNIDAD DE BIENES (ENTRE CONDUEÑOS). . . .	»	245
COMUNIDADES DE ARAGON.	»	245
COMUNIDADES DE CASTILLA.	»	245
COMUNIDADES RELIGIOSAS.	»	250
COMUNION (EN LO CANÓNICO).	»	260
COMUNION.	»	260
COMUNION SACRAMENTAL.	»	260
COMUNISMO.	»	261
CONATO.	»	261
CONCEJO.	»	261
CONCEJO DE LA MESTA. .	»	262
CONCEPCION.	»	266
CONCERTADOR DE PRIVILEGIOS.	»	267
CONCESSUM.	»	267
CONCIENCIA.	»	267
CONCILIÁBULO.	»	267

	TOM.	PÁG.
CONCILIACION (ACTO Ó JUICIO DE).	XII	268
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
SEC. I. Legislacion española.	»	269
Disposiciones anteriores á la ley de Enjuiciamiento civil.	»	269
Ley de Enjuiciamiento civil.	»	272
Disposiciones posteriores. .	»	273
Leyes de Indias.	»	276
SEC. II. Legislacion estranjera..	»	279
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica. .	»	283
SEC. II. Naturaleza y objeto de la conciliacion.	»	287
SEC. III. De los asuntos en que debe, ó no, intentarse la conciliacion.		290
§. 1.° Juicios á que debe preceder la conciliacion: efectos de la falta de este requisito.	»	291
§. 2.° Casos esceptuados de la conciliacion. .	»	292
SEC. IV. De las personas que intervienen en los actos de conciliacion.	»	298
§. 1.° Demandante y demandado. . . .	»	299
§. 2.° Hombres buenos.. .	»	300
§. 3.° Juez competente.. .	»	300
§. 4.° Del Secretario. . .	»	302
SEC. V. Del procedimiento en los actos de conciliacion.	»	303
§. 1.° Demanda y citacion..	»	303
§. 2.° Comparecencia y celebracion del acto.	»	306
§. 3.° Incidentes.. . . .	»	310
SEC. VI. De los efectos de la conciliacion. . .	XII	313
§. 1.° Efectos de la conciliacion intentada. .	»	313
§. 2.° Efectos de la conciliacion convenida, y recursos para invalidarla. . . .	»	316
SEC. VII. Ejecucion de lo convenido en acto de conciliacion. . .	»	320
SEC. VIII. De la conciliacion en asuntos de comercio.	»	322
SEC. IX. De la conciliacion en materia criminal.	»	322
SEC. X. De la conciliacion cuando el demandado goza de fuero especial. . . .	»	324
SEC. XI. De la conciliacion en Ultramar. . .	»	326
CONCILIAR.	»	328
CONCILIAR (EN LO JUDICIAL).	»	328
CONCILIO.	»	328
CONCILIOS DE TOLEDO. .	»	339
CONCILIOS DE ULTRAMAR.	»	351
CÓNCLAVE.	»	353
CONCLUSION EN JUICIO. . .	»	355
CONCORDATO.	»	357
CONCORDATOS ESPAÑOLES.	»	361
PARTE LEGISLATIVA Y DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica, y concordato de 1737..	»	362
SEC. II. Id. de 1753. . . .	»	366
SEC. III. Id. de 1851.. . .	»	371
SEC. IV. Id. de 1859. . . .	»	380
CONCORDIA DEL CONDE DE OSORNO.	»	382
CONCODIA: CONCORDIA FACHENETI.	»	382
CONCUBINATO.	»	383

	TOM.	PÁG.
CONCUERDA.	XII	392
CONCURRENCIA DE ACREEDORES.	»	392
CONCURRENCIA DE CRÉDITOS.	»	392
CONCURRENTE.	»	392
CONCURSO.	»	392
CONCURSO Á CURATOS.	»	393
CONCURSO DE ACREEDORES.	»	393
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Sec. I. Legislacion española.	»	394
Leyes de las Partidas.	»	394
Idem de la Novísima Recopilacion.	»	393
Ley de Enjuiciamiento civil.	»	396
Disposiciones posteriores.	»	405
Leyes de Indias.	»	406
Sec. II. Legislacion estranjera.	»	406
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
Sec. I. Reseña histórica.	»	412
Sec. II. Diferentes clases de concurso de acreedores, y efectos del mismo.	»	414
§. 1.° Diferentes clases de concursos.	»	414
§. 2.° Efectos de la declaracion de concurso.	»	416
Sec. III. Del concurso voluntario.	»	417
§. 1.° Juez competente.	»	417
§. 2.° Personas que pueden presentarse en concurso voluntario.	»	417
§. 3.° Requisitos para la declaracion del concurso voluntario.	»	419
§. 4.° Procedimientos.	»	420
Sec. IV. De la quita y espera.	»	422
§. 1.° Procedimiento especial para la quita y espera: convocacion de la junta de acreedores.	XII	423
§. 2.° Celebracion de la junta de acreedores, y efectos de sus acuerdos.	»	424
§. 3.° Oposicion al acuerdo otorgando la quita ó espera.	»	427
Sec. V. Del concurso necesario.	»	431
§. 1.° Requisitos para la formacion de este juicio.	»	431
§. 2.° Juez competente.	»	433
§. 3.° Pleitos acumulables al de concurso.	»	434
§. 4.° Oposicion del deudor.	»	439
§. 5.° Embargo y depósito de los bienes del deudor, y ocupacion de sus libros, papeles y correspondencia.	»	442
§. 6.° Atribuciones y deberes del depositario.	»	445
§. 7.° Formalizacion del juicio de concurso: convocacion de los acreedores: nombramiento, posesion, atribuciones y cesacion de los síndicos.	»	447
§. 8.° Pieza 1.°—Administracion del concurso. Venta de los los bienes: cuentas de los síndicos.	»	452
§. 9.° Pieza 2.°—Reconocimiento y graduacion de créditos. Pago de los mismos.	»	457

	TOM.	PÁG.
§. 10. Acreedores morosos.	XII	467
§. 11. Pieza 3.ª—Calificacion del concurso. Responsabilidad criminal del concursado, en su caso.	»	470
§. 12. Conclusion del juicio. Rehabilitacion del concursado.	»	474
SEC. VI. Del convenio.	»	476
SEC. VII. Alimentos del concursado.	»	481
SEC. VIII. Declaracion en concurso de testamentarías y ab-intestatos.	»	484
SEC. IX. Del concurso de acreedores en Ultramar.	»	484
CONCURSO UNIVERSITARIO.	»	487
CONCUSION.	»	487
CONDE.	»	488
CONDECORACION.	»	489
CONDENAR.	»	490
CONDESAR, CONDESIJO.	»	492
CONDESTABLE.	»	492
CONDICCION.	»	493
CONDICION.	»	493

PARTE DOCTRINAL.

Sumario.

SEC. I. De las condiciones en general.	»	493
SEC. II. Diversas especies de condiciones.	»	497
CONDONACION.	»	502
CONDUCCION.	»	502
CONDUCTA.	»	502
CONDUCHO.	»	502
CONDUEÑOS.	»	503
CONFARREACION.	»	506
CONFEDERACION.	»	507
CONFESAR.	»	507
CONFESION CON CARGOS.	»	507
CONFESION DE PÉ.	»	508
CONFESION EXTRAJUDICIAL.	XII	51
CONFESION JUDICIAL.	»	51
CONFESION JUDICIAL (EN LO CIVIL).	»	51
CONFESION JUDICIAL (EN LO CRIMINAL).	»	52
CONFESION SACRAMENTAL.	»	52
CONFESO.	»	52
CONFESOR.	»	52
CONFESOR DE MONJAS.	»	53
CONFESORIA (ACCION).	»	53
CONFIANZA.	»	53
CONFIDENCIA.	»	53
CONFIDENCIA BENEFICIAL.	»	53
CONFIESA.	»	53
CONFINAMIENTO.	»	53
CONFIRMACION.	»	53
CONFIRMACION (EN LO CANÓNICO).	»	53
CONFISCACION.	»	53
CONFISCACION (EN LO ECLESIASTICO).	»	53
CONFLICTO DE AUTORIDADES.	»	53
CONFLICTO (EN LO ECLESIASTICO).	»	53
CONFRONTACION, CONFRONTAR.	»	53
CONFUSION.	»	53
CONGREGACION.	»	54
CONGREGACIONES DE CARDENALES.	»	54
CONGRESO.	»	54
CÓNGRUA.	»	55
CONJETURA.	»	55
CONJUEZ.	»	55
CONJUNCION.	»	55
CONJURACION.	»	55
CONMINACION, COMINATORIO.	»	55
CONMISTION.	»	55
CONMUTACION.	»	55
CONMUTACION (EN LO CANÓNICO).	»	55
CONNIVENCIA.	»	55
CONOSCENCIA.	»	55

	TOM.	PÁG.
CONOCER, CONOCIMIENTO.	XII	559
CONOCIMIENTO (EN LO MERCANTIL).	»	560
CONQUISTA.	»	562
CONSAGRACION, CONSAGRAR.	»	563
CONSAGRACION DE ARZOBISPOS.	»	563
CONSAGRACION DE IGLESIAS.	»	564
CONSAGRACION DE OBISPOS.	»	564
CONSAGRACION DEL PAPA.	»	567
CONSAGRACION DE REYES.	»	568
CONSANGUÍNEOS.	»	568
CONSEJO.	»	568
CONSEJO (COMO INSTITUCION).	»	569
CONSEJO DE ADMINISTRACION (EN ULTRAMAR).	»	572
CONSEJO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.	»	574
CONSEJO DEL ALMIRANTAZGO.	»	575
CONSEJO DE ARAGON.	»	583
CONSEJO DE CASTILLA.	»	584
CONSEJO DE CRUZADA.	»	593
CONSEJO DE ESTADO.	»	595
CONSEJO DE FAMILIA.	»	600
CONSEJO DE FILIPINAS.	»	601
CONSEJO DE FLANDES Y BORGOÑA.	»	602
CONSEJO DE GOBIERNO.	»	602
CONSEJO DE GUERRA.	»	603
CONSEJO SUPREMO DE LA GUERRA.	»	613
CONSEJO DE HACIENDA.	»	616
CONSEJO DE INDIAS.	»	624
CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA.	»	628
CONSEJO DE ITALIA.	»	632
CONSEJO DE MINISTROS.	»	632
CONSEJO DE NAVARRA.	»	633
CONSEJO DE LAS ÓRDENES.	»	635
CONSEJO PATERNO.	»	640
CONSEJO DE PORTUGAL.	XII	642
CONSEJOS PROVINCIALES.	»	642
CONSEJO REAL.	»	649
CONSEJO DE REGENCIA.	»	632
CONSEJO DE SANIDAD.	»	652
CONSEJO Y CÁMARA DEL PATRONATO ECLESIÁSTICO.	»	653
CONSEJO Y CÁMARA DE ULTRAMAR.	»	654
CONSENTIMIENTO.	»	655
CONSENTIMIENTO PATERNO.	»	655
CONSERJE.	»	665
CONSERVADOR (JUEZ EN LO CANÓNICO).	»	665
CONSERVADOR (EN LO CIVIL).	»	664
CONSERVATORIO DE ARTES.	»	665
CONSERVATORIO DE MÚSICA.	»	667
CONSIGNACION, CONSIGNAR.	»	669
CONSIGNACION (EN LO JUDICIAL).	»	669
CONSIGNACION (EN LO MERCANTIL).	»	673
CONSIGNACION (EN LO RENTÍSTICO).	»	682
CONSISTORIO.	»	685
CONSÓCIOS.	»	684
CONSOLIDACION EN EL USUFRUCTO.	»	684
CONSOLIDADOS, CONSOLIDACION.	»	684
CONSORTES.	»	687
CONSPIRACION.	»	688
CONSTANTE.	»	695
CONSTANTINOPLA (CONCILIO DE).	»	695
CONSTANZA (CONCILIO DE).	»	696
CONSTITUCION.	»	698
CONSTITUCION (EN LO CIVIL).	»	699
CONSTITUCION (EN EL ÓRDEN ECLESIASTICO).	»	699

	TOM.	PÁG.
CONSTITUCION CIVIL DEL CLERO.	XII	701
CONSTITUCION POLÍTICA.	»	701
CONSTITUCIONAL.	»	701
CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.	»	701
CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE ESPAÑA.	»	701
CONSTITUCIONES SINODALES.	»	715
CONSTITUIDO, CONSTITUYENTE (DERECHO).	»	715
CONSTITUTO POSESORIO.	»	716
CONSUL.	»	716
CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO.	»	717
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. Reseña histórica.	»	717
SEC. II. Disposiciones de derecho civil.	»	720
SEC. III. Legislacion internacional.	»	725
SEC. IV. Novísima ley orgánica, y reglamento con fuerza de ley, sobre la carrera consular.	»	736
CÓNSULES ESPAÑOLES DE LEVANTE Y BERBERÍA (JURISDICCION CRIMINAL DE LOS).	»	739
CÓNSULES ESTRANJEROS EN LA PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES.	»	743
CÓNSULES EN ULTRAMAR.	»	747
CÓNSULES (COMO JUECES DE COMERCIO).	»	749
CONSULADO DE LA MAR.	XII	749
CONSULTA, CONSULTOR, CONSULTIVO.	»	755
CONSULTATIO VETERIS JURISCONSULTI.	»	756
CONSULTOR DE COMERCIO.	»	786
CONSUMACION, CONSUMADO.	»	756
CONSUMOS (RENTA Ó CONTRIBUCION DE).	»	756
CONTABILIDAD EN HACIENDA.	»	762
PARTE LEGISLATIVA.		
Sumario.		
Ley de administracion y contabilidad de la Hacienda pública, de 20 de Febrero de 1850.	»	762
Ley de 23 de Agosto de 1851, dando nueva organizacion al Tribunal de Cuentas del Reino.	»	765
Ley provisional de administracion y contabilidad de la Hacienda, de 25 de Junio de 1870.	»	769
Ley provisional de organizacion del Tribunal de Cuentas del Reino, de 25 de Junio de 1870.	»	775
PARTE DOCTRINAL.		
Sumario.		
SEC. I. De la contabilidad en la Península.	»	782
SEC. II. De la contabilidad en Ultramar.	»	788
CONTABILIDAD MERCANTIL.	»	790